



XXXII CONGRESO INTERNACIONAL
ALAS PERÚ 2019



Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización de vida
del 1 al 6 de diciembre-Lima

DOSSIER

ACCIONES COLECTIVAS Y MOVIMIENTOS
SOCIALES

GRUPO DE TRABAJO 19

Lima, Perú 2020

**ALAS****XXXII CONGRESO INTERNACIONAL ALAS PERÚ 2019****©ALAS-ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA****DOSSIER****ACCIONES COLECTIVAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES****GRUPO DE TRABAJO 19****PRESIDENCIA ALAS:**

Jaime Ríos Burga (Perú)

VICEPRESIDENCIA ALAS:

Mg. Jesús Díaz (República Dominicana)

COMITÉ DIRECTIVO:

Dr. Federico Schuster (Argentina)

Dr. Breno Bringel (Brasil)

Dr. Milton Vidal (Chile)

Dr. Alexander Gamba (Colombia)

Dra. Angélica Cuellar (México)

Dra. Briseida Barrantes (Panamá)

Dr. Eduardo Arroyo (Perú)

Dra. Marina Ortíz (República Dominicana)

COORDINADORES GRUPO DE TRABAJO 19:

Dr. Federico Schuster (Argentina)

Dr. Breno Bringel (Brasil)

Dr. Rudys Flores (El Salvador)

Dra. Anahí Durand (Perú)

Dr. Jorge Duárez (Perú)

EDITADO POR:

© ALAS-ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA PERÚ

Jr. Alonso de Molina N° 1231, Dpto. 303 - Santiago de Surco

Lima-Perú

<http://sociologia-alas.org/>

Primera edición digital, marzo 2021.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Angelo Aguilar (Perú)

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú**ISBN 978-612-5025-04-3****DERECHOS RESERVADOS ALAS ©**



PRESENTACIÓN

El DOSSIER que presentamos es el resultado de las ponencias entregadas al XXXII Congreso Internacional ALAS Perú realizado en diciembre del 2019. Cada uno de nuestros 25 Grupos de Trabajo: Ciencia, Tecnologías e Innovación; Ciudades Latinoamericanas en el Nuevo Milenio; Producción, Consumos Culturales y Medios de Comunicación; Estado, Legitimidad, Gobernabilidad y Democracia; Desarrollo Rural y cuestión agraria; Imaginarios Sociales y Memoria; Desarrollo Territorial, Desigualdades y descentralización; Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social; Estructura Social, Dinámica Demográfica y Migraciones; Estudios políticos, Socio jurídicos e Instituciones; Género, Feminismos y sus aportes a las Ciencias Sociales; Sociología de la Cultura, Arte, Interculturalidad y Religiones; Teoría Social y Pensamiento Latinoamericano; Medio Ambiente, Sociedad y Desarrollo Sustentable; Metodología y Epistemología de las Ciencias Sociales; Universidad Latinoamericana: interpelaciones y desafíos; Trabajo y Restructuración Productiva; Salud, Seguridad Social y Discapacidades; Acciones Colectivas y Movimientos Sociales; Sociología de la Niñez, Juventud y Envejecimiento; Corrupción, Violencia Social, Seguridad y Defensa; Alimentación y Cocinas en las Américas; Sociología de la Educación, Políticas Educativas y Deporte; Integración Regional, Geopolítica y Desarrollo; y, Sociología de los Cuerpos y las Emociones; muestran su rica producción teórica empírica desde sus propias experiencias críticas de saber en América Latina y el Caribe.

Reflexión que en sus diversos campos específicos nos muestran la riqueza del diálogo y el debate realizado en nuestro XXXII Congreso ALAS Perú 2019. Así mismo, queda como evidencia la integración de la sociología cada vez más con los otros campos del saber, sacando a luz o visibilizando la sociología de las ausencias y emergencias en la presente transición global. Un esfuerzo epistémico y metodológico por adentrarse a las situaciones y problemáticas más saltantes de la vida social en sus interacciones y transversalidad temática con sus áreas de problemática y otras áreas centrales de investigación social presentes en nuestros Grupos de Trabajo de investigación y otras comunidades científica del mundo en el esfuerzo creativo por construir un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización de vida que descoloniza el ser, el saber y el poder afirmando la calidad de vida en nuestras sociedades.



Mi agradecimiento en nombre de la Presidencia y Comité Directivo actual a cada uno de la/os coordinadoras/es, quienes hicieron realidad este compromiso institucional con ALAS.

Dr. Jaime Ríos
Presidente de ALAS



INTRODUCCIÓN

El protagonismo de los movimientos sociales en América Latina está fuera de toda duda. Los debates públicos que se generan en diferentes países de la región están influidos por el quehacer de estos actores. Permítanme referir solo tres casos a modo de ejemplo: en Argentina, el movimiento feminista ha logrado poner en debate los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; en Bolivia, los cambios socioculturales y económicos de los últimos años son incomprensibles sin considerar la influencia del movimiento indígena; y en Chile, los profundos cambios que se vienen gestando a nivel constitucional pueden rastrearse a través del accionar del movimiento estudiantil. En contraste con la escasa capacidad de interpelación social que muestran los partidos políticos, los movimientos sociales se presentan como espacios de creación política, tanto a nivel de producción discursiva como a nivel de repertorios de acción colectiva.

Los movimientos sociales contemporáneos en América Latina desafían nuestra capacidad de descripción y análisis, demandándonos innovaciones metodológicas y conceptuales. La heterogeneidad de estos actores en la región en términos de identidades, repertorios de acción, formas de organización, de relación con el Estado, entre otros, es una fuente para generar nuevas preguntas e indagaciones en torno a lo político. Por tanto, en el actual momento de profundas reconfiguraciones societales, resulta fundamental discutir el papel de estos actores, sus diferentes expresiones y las herramientas conceptuales que disponemos para su estudio.

El Grupo de Trabajo “Acciones Colectivas y Movimientos Sociales” asumió el reto de promover un espacio de reflexión y debate en torno a los movimientos sociales en América Latina. Alrededor de noventa investigadoras y ochenta investigadores de siete países de la región participaron en esta experiencia, a través de diez líneas temáticas. Los dos temas que convocaron una mayor cantidad de intervenciones fueron la relación entre movimientos sociales, la sociedad civil y Estado y los procesos de organización, formas de lucha y nuevos repertorios de acción de los movimientos sociales. Otro tema que convocó una importante cantidad de participaciones fue la relación entre movimientos sociales y la construcción y defensa de la ciudadanía, los derechos humanos y lo común. Los debates epistemológicos, teóricos y metodológicos en el estudio de los movimientos sociales y las acciones colectivas no estuvieron ausentes. Los investigadores e investigadoras destacaron la importancia de, sin dejar de reconocer sus aportes, ir más allá de la teoría de los movimientos sociales de la denominada escuela norteamericana. Por último, entre los temas más específicos



relacionados a los movimientos sociales estuvieron: el extractivismo, sustentabilidad y dinámicas de conflicto en torno a los territorios; la violencia política y la criminalización de la protesta social; el género, las configuraciones identitarias y las nuevas agendas en las expresiones colectivas; la importancia de la formación / educación en el campo popular; las movilizaciones y las demandas conservadoras; y las redes transnacionales, las escalas y alternativas regionales.

El Grupo de Trabajo procuró generar un espacio de reflexión colectiva para dar un nuevo paso en el conocimiento compartido sobre el tema. Consideramos que el propósito fue logrado. Como muestra de ello presentamos a continuación las ponencias discutidas en el Congreso, organizadas por líneas de trabajo. Esperamos que este Dossier siga promoviendo la investigación y el debate en torno a un tema tan relevante para la región como lo es la acción colectiva y los movimientos sociales.

Dr. Jorge Luis Duárez Mendoza



19. ACCIONES COLECTIVAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Línea Temática 1. Debates epistemológicos, teóricos y metodológicos en el estudio de los movimientos sociales y las acciones colectivas

Pág. 18

Diferencias en los discursos de los estudiantes que realizaron acciones políticas en la facultad de ciencias sociales de la UNMSM del 2014-2017

Katherine Lisset Diaz Canchari

Identidades políticas: Propuesta de marco analítico para su estudio

Sofía Lanchimba Velastegui

Movimentos sociais, educação popular e a descolonização do saber

Danilla Aguiar

Mapeamento da produção acadêmica sobre movimentos sociais no Brasil: Teses e dissertações defendidas entre 2013 e 2018

Caio Becsi Valiengo

¿Construir otra sociedad desde los movimientos?: Los movimientos sociales como modo de existencia de la lucha en la sociedad capitalista.

Manuel Garza Zepeda; Ever Sánchez Osorio

Recientes avances en la teoría del framing y su aplicación a los movimientos sociales latinoamericanos. Enmarcando disputas por el sentido

Marcelo Flavio Gomez

Campo de ação: Atores, práticas e gramáticas

Raul Nunes de Oliveira

Educação do campo no brasil: Uma trajetória de lutas e conquistas

Joelma Miriam de Oliveira; Maria Iveni de Lima Silva

Línea Temática 2. Movimientos sociales, construcción y defensa de la ciudadanía, los derechos humanos y lo común

Pág. 132

Las redes ciudadanas territoriales: Movimientos de inclusión y control al manejo público: un caso del trabajo en red de las OSC en Guayaquil

Javier Gutiérrez Enríquez

Movimentos Sociais e a luta pelo direito à cidade: A experiência extensionista com Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)

Eblin Joseph Farage; Sabrina dos Santos Dias; Karina Avelar da Silva

De los sueños, hacia una agenda de ciudadanía juvenil. La juventud Santanera abre caminos de transformación social.

Augusto César Rodríguez Maturana; Rodolfo Rodríguez Mendrales; Ingrid del Carmen Torres Barragan



¡Pensar, hacer y vender... también es ciudadanía!
Rodolfo Rodríguez Mendrales; Ricardo Sierra Guerrero

Comum e revolução: Um debate a partir das obras de hardt e negri e dardot e laval
Felipe De Queiroz Braga; Andrea Ávila

Revisión histórico-narrativa sobre los movimientos sociales en la capital paulista
Lara Paixão; Aurea Maria Zöllner Ianni

Las reconfiguraciones socioespaciales en la región andinoamazónica del Perú
Leandro Bonecini de Almeida

Avá-Guarani e o processo de demarcação de terras indígenas no Oeste do Paraná (década de 2010)
Rinaldo José Varussa

Inclusion through Organization - Social Movements in the Global South as an Exercise of Self-Inclusion of the Excluded
Philipp Altmann

Movilizaciones comunales, subjetividades políticas y colonialismo contemporáneo en Cajamarca Perú
Donatto Badillo Cuevas

Fórum popular das águas: Mobilização social de resistência no ceará, Brasil
Liana de Andrade Esmeraldo Pereira; Tiago Esmeraldo Pereira; Pâmela Christina Silva Tavares

Utopías en los movimientos sociales: Los casos de Magallanes/2011 y Aysén/2012
Nicole Tamara Sepúlveda Cordero

Movimentos sociais e ações coletivas – abordagens clássicos e contemporâneas
Nelmires Ferreira da Silva

La participación de las mujeres indígenas: Los obstáculos para la construcción de una democracia representativa
Maireth Dueñas Chinchay

Develando movimientos pacifistas de mujeres: la ruta pacífica de las mujeres en Colombia
Gloria Inés Montoya Duque

La lucha por la vejez y envejecimiento dignos a través de las organizaciones y movimientos de la sociedad civil internacional
Paola Carmina Gutiérrez Cuéllar; Mariana Aparicio Ramírez

El potencial democrático del derecho a la educación para los movimientos universitarios de Colombia y Chile
Eliécer Soto Ardila



Línea Temática 3. Relación entre movimientos sociales, sociedad civil y Estado

Pág. 363

Brasil, política e aceleração
Javier Alejandro Lifschitz

A construção da agenda da política de igualdade racial no Brasil
Carlos Augusto Sant'Anna Guimarães

“Nada sobre nós sem nós”: povo de rua e a política nacional da população em situação de rua no Brasil
Kelly Cristina Santos Morais

Educação do campo no Brasil e a luta pelo reconhecimento de suas demandas nas agendas políticas
Janini Paula Silva

Os coletivos como nova forma de ação social na região nordeste do Brasil
Iara Cavalcante de Melo; Francisco Mesquita de Oliveira

Entre a autonomia e a institucionalização de lutas sociais: coletivos brasileiros de ocupação e inovação política”
Flavia de Faria

El movimiento político aymara de Chile en la década de los '90
Luis Godoy Saavedra; Darío Omar Funes Vidal

Criminalización y resistencias: análisis de experiencias de luchas territoriales en el norte de la Patagonia
Mariana Andrea Giaretto

Movimientos socioterritoriales y Estado: la autonomía y la cooptación desde una perspectiva espacial
Fernanda Valeria Torres

¿Y qué pasó con el movimiento estudiantil? Discursos de dirigentes estudiantiles sobre el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera
Simón Bautista Mendoza Aravena

Movimientos Estudiantiles Universitarios Latinoamericanos en el Siglo XX
Luis Jesús Teneúd Navarro; Danuta Estrufika Canotia Luiz

Movimientos sociales y justicia hídrica: la experiencia de la Asamblea de Afectados Ambientales en México
Patricia Ávila García

Entre la fuerza y el consenso: análisis de procesos de diálogo en escenarios mineros de Espinar y Chumbivilcas, región Cusco 2012-2017
José Antonio Lapa Romero



Educación, trabajo e meio ambiente: a experiência do lampear no fortalecimento da universidade e da sociedade para renovadas criações históricas
Fernando Bomfim Mariana

Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una (FMPBU) em Belém/Pará: lutas pelo direito à cidade
André Luiz Santos Alves; Edivania Santos Alves; José de Jesus Costa.

O público da agricultura familiar – Uma mirada a partir das organizações e movimentos sociais na REAF Mercosul
Silvia Aparecida Zimmermann

“Alguma coisa já está acontecendo”: Estado e sociedade na promoção dos direitos dos povos indígenas em minas gerais
Maria Carolina Arruda Branco

El Estado hacia la tangente: mujeres objetos de políticas públicas con marco normativo. Programa Red de Salas Cuna (Córdoba- Argentina)
Nerea Lucrecia Jodor; Juan Lenardon; Karim Milena Stegmayer

Mulheres e economia solidária no brasil - Processos organizativos e lutas por trabalho, cidadania e políticas públicas
Carlúcia Maria Silva; Helania Martins de Souza

La nueva elite política brasileña: reconfiguración del Estado y desafíos para la movilización popular
Victoria Darling

O que vem depois da negação? Construções autônomas de movimentos sociais em suas relações com o Estado desde experiências mexicanas
Gustavo Oliveira; Monika Dowbor

El movimiento de derechos humanos argentino y su vinculación con el Estado: un estado de la cuestión hasta H.I.J.O.S. (1976-2015)
Carolina Sofía Tavano

A conduta do Estado e as formas de resistência: pelo que você luta?
Gabriel Lima Simões

Línea Temática 4. Violencia política y criminalización de la protesta social en América Latina

Pág. 702

La deuda social en México. El desafío de conformar una Comisi
Valeria Fernanda Falleti

Estado moderno/colonial y resistencias políticas: Una aproximación al caso chileno
Michel Sebastián Canales Cisterna; Felipe Sebastián Muñoz González

Movimiento barrial en tiempos de “Guerra Popular”: AAHH. Laura Caller-Los Olivos entre 1989 a 1992
Alan Arturo Pelayo Soriano



Quando a justiça cala as ruas: estudo de caso de um processo judicial contra 18 manifestantes em São Paulo
Mariana Pinto Zoccal

Línea Temática 5. Procesos de organización, formas de lucha y nuevos repertorios de acción

Pág. 753

Coletivos como Práticas Decoloniais
Kary Emanuelle Reis Coimbra

Hacia un horizonte decolonial: Acción colectiva e identidad de la Red Federal de Afroargentinos/as del Tronco Colonial”
Guadalupe Román

Pentagramas colectivos y cantos insurgentes: FARC-EP
Laura Daniela Giraldo Melo

Relaciones entre el tejido y la sororidad
Ana María Sossa Londoño

Las formas de acción colectiva y la organización sindical en los procesos de movilización de las docentes santafesinas durante la dictadura cívico-militar de 1966-1973
Carlos Marcelo Andelique

Narcotráfico, máquinas de guerra y acción colectiva rural en la región Centro de Guerrero 2013-2017
Daniel Gatica Polco

Práticas e Discursos da ação coletiva: Coletivos na cidade de São Paulo
Marilia Jahnel de Oliveira

Acción colectiva por la paz: Procesos organizativos y repertorios de acción
Alba Jakeline Ruano Jimenez

El movimiento de los encuentros, subvierte la naturalización de las subjetividades
Maribel Vásquez Narváez; Leidy Johana Rodríguez; Jessic Caudillo

Primavera árabe en Egipto y Siria. Una aproximación sobre las identidades populares
Ignacio Robba Toribio

Movimento de Cultura Popular no Recife, Pernambuco, Brasil: A Educação de Adultos em diálogos com a Cultura Popular
Stefani Tamires Alves Ribeiro Holanda; Mário de Faria Carvalho

Hip hop causa e efeito: Intervindo na violência com arte
Leonardo Luiz da Silva Araujo

Os coletivos de Sarau: Novas formas de ação coletiva e novas agendas
Rachel de Castro Almeida; Adriana Maria Brandão Penzim; Rodrigo Costa Silva Matos



O 55º congresso da une: Análise do discurso e fotográfico do maior evento da juventude universitária brasileira
Thiago Modenesi

Da luta pela terra à luta pela educação escolar quilombola: Trajetórias insurgentes, estratégias subversivas e mediadores políticos
Ediléia Carvalho

Mujeres en movimiento: Organización, lucha y resistencia contra la reforma educativa de 2013 en México
Sarahi del Mar Granados Cosme

As Manifestações Estudantis na Perspectiva do “Movimento Não Pago” em Aracaju – Se
José Welington de Jesus

Ocupação como aprendizado: experiências de participação em ocupações de escolas no Distrito Federal em 2016
Salles Dimitri Melo Oliveira

Acción colectiva, resistencia y lucha. Las voces del 68 mexicano
Maria Guadalupe Membrillo Carrera; Susana Torres Ortiz

Legitimidad y acción colectiva: el caso del movimiento estudiantil chileno
Juan Sandoval Moya; Fuad Hatibovic Díaz

Para além da escola: a educação produzida por jovens e adultos – feirantes – em uma feira-livre de feira de santana
Sara Soares Costa Mamona; Francisca de Paula Santos da Silva; Mário Procopiuck

El voluntariado y su aporte al desarrollo local desde una mirada de Buen Vivir en Arequipa. El caso de la Red Arequipa Voluntaria
Yosanira María Corzo Orihuela; Luz Fiorella Salazar Berlanga

Línea Temática 6. Género, configuraciones identitarias y nuevas agendas en las expresiones colectivas

Pág. 1050

Etnicidad en debate. El caso de las comunidades de Cantagallo y de Nueva Alianza en la construcción de su etnicidad
Jesús Anzualdo Contreras

Projeto político decolonial e arranjos transmodernos. Gênero e etnicidade no movimento zapatista
Cristian Jobi Salaini; Laura Marquesan Eschberger

Sem-rostro, sem-terra, com-voz: Historicidade do movimento de mulheres do MST e do EZLN
Vitória Gonzalez Rodriguez



Percepções de jovens mulheres em uma ocupação por moradia: reivindicações por direitos sociais e políticas públicas

Mirlene Fátima Simões; Monica Fonseca Wexell Severo

Constituição do processo histórico do movimento LGBT na cidade de Manaus-AM: Por entre desafios e perspectivas de emancipação

André da Silva Martins; Luciana Henrique da Silva

Interpretando intérpretes: uma análise feminista das teorias clássicas dos movimentos sociais

Mariane Silva Reghim

Línea Temática 7. Redes transnacionales, escalas y alternativas regionales

Pág. 1142

“Territorio” como concepto clave en la movilización y organización social: Análisis de la concepción territorial en experiencias en la provincia de Entre Ríos

Marcelo D Amico; César Arístides Pibernus; Diego Roldán

El Movimiento Transnacional por la Justicia Fiscal: Asimetrías, creatividad y autonomía en América Latina y África Subsahariana

Alice Soares Guimarães; Federica Duca

Línea Temática 8. La importancia de la formación / educación en el campo popular

Pág. 1174

A participação dos Movimentos Sociais na Construção da Universidade Popular: Uma análise da experiência da Unilab

Leandro Proença; Pedro Rosas Magrini

La Educación Popular en el movimiento social Levante Popular da Juventude en Pernambuco

Marília Lima da Silva

“¡Esta escuela me salvó la vida!”. Jóvenes y experiencias educativas en una escuela gestada por una organización política

Marilín López Fittipaldi

A educação no maranhão: Indicações sobre a proposta político pedagógica do “Sim, eu posso” e “Círculos de cultura”

Zaira Sabry Azar; Cristiana Costa Lima

Línea Temática 9. Movimientos sociales, extractivismo, sustentabilidad y dinámicas de conflicto en torno a los territorios

Pág. 1226

Autonomía y autogestión como defensa del territorio en las comunidades adheridas al Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI)

Luis Castillo Farjat



Hegemonía y resistencia. Conflictos territoriales en el caso de las comunas étnicas de la costa ecuatoriana

Marie-Therese Lager

Las organizaciones de la sociedad civil en el conflicto socioambiental del Río Sonora: Trasfondo de un derrame minero.

Crisel Lugo Gil

Oposición y negociación en conflictos generados por megaminería en México

Ulises Pavel Martínez Romero

Articulação camponesa e conflitos socioambientais no cerrado: Impactos dos grandes empreendimentos agrícolas do Matopiba- Barra do ouro

Rejane Medeiros; Valéria Pereira Santos

La paradoja entre diálogo y confrontación en los conflictos sociales vinculados con empresas mineras: estudio comparado sobre los factores contextuales

Mario Pasco Dalla Porta

Comunalidad y territorio: Otra mirada sobre la acción colectiva

Giovanna Mazzotti Pabello

Tensiones territoriales como un factor de unificación. Organización social en Quiba

Jesús David Portela Velasquez

Línea Temática 10. Movilizaciones y demandas conservadoras

Pág. 1339

Reconfigurações políticas, demandas conservadoras e discursos de/sobre povos indígenas

Tatiana Bonin

Trajatórias de uma distopia: os grupos conservadores e sua agenda política das jornadas de junho de 2013 até 2018

Fernando Antonio da Costa Vieira; Afranio de Oliveira Silva

Uso das mídias sociais pela direita brasileira: a defesa do Escola Sem Partido no Facebook e Instagram

Ricardo Gonçalves Severo; Suzane da Rocha Vieira Gonçalves; Rodrigo Duque Estrada Campos

Otras líneas de ponencias adicionales

Pág. 1394

Contribuciones para el estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado: Hacia la construcción de una mirada latinoamericana.

Mariana Fry

Ocupación colectiva como medio de superación del Apartheid Ocupacional: El caso de la lucha por el derecho a la salud de la Agrupación Mama Cultiva



Cristian Mauricio Valderrama Núñez; Alejandro Hermosilla; Sofia Sepulveda; Michelle Roa Riffo; Camila Reyes Martínez

La profanación como traición en la configuración de las subjetividades en la condición neoliberal

Jorge Eliécer Martínez Posada; Gina Marcela Reyes Sánchez

Reconfiguraciones en la lucha Dreamer de Arizona ante la política migratoria de Trump

María José Grisel Enríquez-Cabral; Ismael García Castro

Graves violações de direitos humanos contra camponeses e indígenas no Brasil

Angelo Priori

Os 50 anos do maio de 1968 e seus reflexos no Brasil: Uma análise da corbetura midiática

Lucas Barbosa Branco; Marcus Vinícius Costa da Conceição

Desaparición de personas en México: La acción colectiva frente al Estado en la búsqueda de la verdad

María Teresa Villarreal Martínez

Más allá de los Estados: La Iniciativa de Infraestructura para la Región Sudamericana y la sociedad civil entre silenciamiento y oposición

Dario Clemente

Lo que quieren los colectivos de familiares de migrantes desaparecidos frente lo que quiere la sociedad civil que les acompaña

Gabriela Martínez Castillo

Da “movimentação” ao mandato: as inovações democráticas das “Muitas” e da “Gabinetona”

Flávia de Paula Duque Brasil; Fernando Resende Anelli; Rodolfo Pinhón Bechtluft

Protestas vecinales durante la transición democrática argentina. Estudios sobre su desarrollo en un municipio de la región Centro-oeste santafesino

María Cecilia Tonon

La memoria de una ciudad: Ambato, el desastre y la reconstrucción social

Estefanía de los Ángeles Parra Ortíz

La restricción de la participación política en el Departamento del Cauca: Entre las élites y el conflicto

Daniella Beltrán; Luis Felipe Rodríguez; Julie Paola Tibocho; Angie Daniela Tinoco

Trajetória do movimento negro unificado em goiás: os dilemas e as ações mobilizadoras contra o racismo

Gabrielle Andrade da Silva

Eleição da Bancada Ativista em São Paulo, Brasil: Mandato coletivo como proposta de representação política contemporânea

Priscila Dayne Galvão Silva; Cynthia Harumy Watanabe Correa



Juventudes, mobilizações e ativismos contemporâneos no Brasil

Frank Marcon

La práctica política y la construcción de la autonomía zapatista: Los gobiernos autónomos y el ejercicio del poder

Vladimir Viramontes Cabrera; Silvana Figueroa Delgado

Actores sociales y acción organizada en un escenario neoliberal. El caso de los emprendedores sociales en Medellín (Colombia)

John Fernando Macías Prada

Imágenes, Afiches y Banners. Una mirada al uso de lo visual desde los colectivos de género en internet

Carlos Andrés Martínez; Tania Meneses Cabrera

Movimentos sociais, educação superior e novas epistemologias

Joviles Vítório Trevisol

Princípios filosóficos e pedagógicos que norteiam a formação educativa dos atores sociais no movimento dos trabalhadores rurais sem terra

Paula Silva Janini

Movimentos sociais e educação do campo: Reflexões sobre reforma agrária popular

Railson Borges Lima; Railson Borges Lima; Alane Borges Lima

Sistematización de análisis de coyuntura política en salud como forma de enseñanza sobre el escenario neofascista en Brasil

Áquilas Mendes; Leonardo Carnut; Daniele Correia

Turismo de base comunitaria y justicia ambiental en pueblos originarios

Torres-Alruiz, María Daniela, Christian Martínez N., Marisela Pilquimán V.

La memoria cultural y comunicativa del movimiento estudiantil de tres universidades del sur de Colombia

David Felipe Bernal Romero

Ocupaciones colectivas y colonialidad de la naturaleza: descomposicion y re-existencia ingenua

Alejandro Sebastian Hermosilla Alarcon; Cristian Mauricio Valderrama Nuñez; Sofia Beatriz Sepulveda Hernandez



Línea Temática 1.

**Debates epistemológicos, teóricos
y metodológicos en el estudio de los
movimientos sociales y las acciones colectivas**



“Diferencias en los discursos de los estudiantes que realizaron acciones políticas en la facultad de ciencias sociales de la unmsm del 2014-2017”.

Katherine Lisset Diaz Canchari

Resumen

La presente investigación tiene como propósito analizar los principales discursos de los estudiantes que realizaron acciones políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM¹: 2014-2017, período escogido por la coyuntura suscitada, debido a la implementación de la “Nueva Ley Universitaria 30220” y la reconstrucción del C.F.CC.SS² y la FUSM³.

Analizo este fenómeno en base a la propuesta de Tarrow, quien plantea como el movimiento estudiantil deja de ser un movimiento al solo realizar “acciones colectivas” perdiendo así su institucionalidad y transcendencia en el tiempo. Recorro también a Touraine, quien explica que las acciones sociales ejercen una fuerza de presión o cambio, en base a los recursos culturales existentes en un determinado contexto, direccionando así su accionar e imaginario colectivo. Y en el ámbito discursivo, ya que ambas son organizaciones de izquierda, recorro a la propuesta de Suarez y Sánchez, para la diferenciación sobre los tipos de izquierda: una es rupturista y otra, más conciliadora.

El objeto de estudio de la investigación son dos agrupaciones políticas de la Facultad de Sociales, que tuvieron presencia en importantes eventos en el movimiento estudiantil, en este caso, Makicha⁴ y APU⁵, para lo cual me basé en entrevistas por conveniencia a los principales dirigentes estudiantiles de ambas agrupaciones y estudiantes simpatizantes de ambos espacios políticos, así como en pronunciamientos elaborados por ambas agrupaciones y en la aplicación de la técnica de observación participante. Obtuve cómo resultado principal que sus diferencias no radican necesariamente en cuestiones ideológicas sino culturales, y tales intereses se ven plasmados en sus acciones políticas. Makicha considera que el movimiento estudiantil debería direccionarse hacia la “lucha popular” ligando al pueblo con la universidad, mientras que A.P.U considera que la lucha debe contextualizarle a la realidad universitaria, realizando reformas que mejoren las expectativas del estudiante para obtener así representatividad cuando estén fuera de la universidad.



Palabras clave

Discurso, acciones políticas; Estilos de vidas; Movimiento estudiantil; Agrupaciones políticas.

Introducción

La presente investigación responde a la preocupación por conocer y comprender los discursos que conforman el movimiento estudiantil en Lima, entorno a una mirada desde la Teoría de los Movimientos Sociales. Esto debido a la presencia de las manifestaciones que se han suscitado en los últimos años, cuyas consignas denotan heterogeneidad en los reclamos de los diversos grupos que conforman el movimiento social. En el caso del movimiento estudiantil, se entiende su perduración producto de las insatisfacciones educativas y la desatención del gobierno por superarlas, por lo cual recurren a ciertas medidas que le permitan lograr sus objetivos, los cuales son de mucha relevancia. Requieren, para ello, analizar sus diferencias y proponer posibles soluciones, que desvanezcan sus óbices y logren mancomunar su causa. Para comprender mejor la problemática en cuestión, la investigación se limitó a investigar en la institución educativa superior público más antigua y reconocida a nivel nacional en Lima-Perú, por su carácter político y poder de convocatoria estudiantil: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y de ella, específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales en el periodo 2014-2017, ya que, en esta época se reconstruyó la mayor instancia gremial de la Facultad de Sociales, el “Centro Federado”. Además, en ese mismo periodo, se presenciaron los desacuerdos ocurridos con respecto a la implementación de “La Nueva Ley Universitaria”. Por ello, me he centrado en analizar a los grupos con más presencia en la facultad en dicho periodo, que promovieron la agitación de los estudiantes para las posteriores manifestaciones tanto fuera y dentro de la universidad, donde los integrantes de los grupos Makicha⁵ y APU⁶ son los actores que desempeñan un rol protagónico en la construcción de los significados característicos de su contexto. En última instancia, este análisis nos ayudará a comprender el basamento ideológico-cultural que guía sus acciones.

Por lo mencionado me he propuesto a esclarecer los discursos políticos de ambas agrupaciones. De manera que sea más fácil entender sus acciones políticas y los estilos de vida que adoptan los miembros de las agrupaciones en cuestión. Respecto a los discursos políticos, se tiene como eje la posición política e ideológica bajo la cual cada agrupación dirige su agenda programática. Con respecto a las acciones políticas, me centro más en las estrategias (internas y/o externas) que ponen en práctica estas



agrupaciones, para llevar acabo sus agendas políticas, con el fin de desentrañar si estas agrupaciones buscan tener presencia solo dentro de la universidad e intenta promover el fortalecimiento del movimiento estudiantil y/o buscan garantizar su presencia externa, ya sea en partidos políticos o cargos en el Estado, debido al prestigio político que otorga la participación estudiantil dentro de la UNMSM. Y el tercer y último objetivo que me propongo es evidenciar, a partir de sus estilos de vida, la afinidad étnico- tradicional que cohesiona a los integrantes de las agrupaciones mencionadas, para comprender así la homogeneidad o la heterogeneidad de estilos de vida que los integra e identifica como organización política.

Marco teórico

El desarrollo de la teoría del movimiento social, a partir de mediados de los setentas y ochentas, ha empezado a orientarse hacia la formulación de teorizaciones particulares, con base en los diferentes tipos y niveles de los movimientos sociales. De este modo ha ido ganando especificidad, a través de conceptualizaciones que han permitido abordar las modalidades existentes y las emergentes, lo que en conjunto ha contribuido a un mayor rigor teórico del tema en cuestión (Aranda, 2000: 225). Los movimientos sociales, a finales del siglo pasado, han sufrido sus principales transformaciones a partir del descontento y la incertidumbre de la sociedad civil frente a un contexto de crisis socio-político agravado por el neoliberalismo y por su decisión de impulsar cambios. Es en este contexto que el movimiento estudiantil aparece con su característico radicalismo⁷ y explosividad, influyendo en movilizaciones de gran alcance social.

La evolución de los movimientos sociales, pensada desde la historiografía, no ha cobrado la suficiente relevancia para incorporarse a los hechos que “hacen historia”, pues no se puede fijar de manera clara dentro de esta ciencia. Sin embargo, puede afirmarse que este tipo de grupos están fundados en acciones colectivas, en las que intervienen grupos y actores sociales con el objetivo de reivindicar aquellos que consideran derechos o legítimas reclamaciones para sí, o para los grupos a los que representan.

Los movimientos sociales, entendidos como “el conjunto de acciones sociales colectivas que expresan intencionalmente demandas o presionan soluciones ante el Estado, las entidades privadas o los individuos”, nacen de las contradicciones sociales, culturales, económicas o políticas que engendran una desafección por la clase política que, institucionalmente, rige en muchos sentidos los destinos comunes. Esto nos revela que los miembros que integran el movimiento social no se sienten identificados con el



régimen político y con sus gobernantes, lo que en efecto traería como consecuencia la deslegitimación política del régimen y los actores que ejercen el poder.

En este sentido, la teoría de la acción social tendrá suma importancia en cuanto a las reflexiones acerca de los movimientos sociales como también, en hacer la distinción entre la acción colectiva y el movimiento social, haciendo énfasis en el grado y alcances de la primera, así como en los objetivos de mayor importancia social en el caso de los movimientos sociales (Bolos, 1999:119-121).

La teoría de la movilización de recursos considera que los movimientos sociales son formas innovadoras de participación política, la cual crea y toma nuevos recursos políticos disponibles en las modernas sociedades democráticas (Aranda, 2000: 227). De modo que se presenta a los movimientos sociales como respuestas racionales y novedosas ante las nuevas situaciones y oportunidades de la sociedad. Los movimientos sociales son percibidos como grupos de presión emergentes o como partidos embrionarios que surgen como parte de los procesos políticos y que tienen objetivos precisos. Sidney Tarrow (1997), nos dice que para que se genere un movimiento social no basta con solo el hecho de hacer protesta (privaciones, etc.), sino que es fundamental disponer de recursos y de oportunidades para la acción colectiva, lo cual permitirá que perdure la existencia de la organización como recurso fundamental para la movilizar a las personas. De ahí se entiende que no es la privación o el malestar social, sino la prosperidad lo que facilita la aparición y el auge de los movimientos sociales, ya que permite disponer de mayores recursos, tanto personales (debido a la adhesión de individuos por razones de conciencia, es decir, de individuos que al tener resueltos sus problemas vitales básicos, disponen de recursos excedentes en tiempo, dinero y energía para dedicarlos a las actividades del movimiento) como de recursos materiales más abundantes. Con respecto a la organización, se diferencia entre la organización de los movimientos sociales de protesta con las organizaciones burocráticas tradicionales (partidos, sindicatos, etc.). Las organizaciones de los movimientos sociales contienen grupos diversos, sin un mando único, con multiplicidad de liderazgos y de objetivos, y con canales de comunicación entre sí. En algunos casos, dichas organizaciones evolucionan hacia su institucionalización burocrática, pero ello ocurre sólo cuando el mismo movimiento social ha perdido su potencia movilizadora inicial.

En cambio en la acción colectiva, la teoría de la movilización de recursos plantea que los movimientos sociales son una forma de hacer política por otros medios, y más en



concreto, por los únicos medios con que cuentan los grupos desprovistos de poder y que por ello no consiguen acceder a las formas institucionalizadas de acción política. Tarrow explica como los movimientos sociales ponen en manifiesto la fuerza de los ciudadanos de a pie antagónicos a las élites que regentan el poder, lo cual origina la estructuración de las relaciones sociales en base a redes y símbolos que construyen una identidad colectiva, siendo este un acicate para el emprendimiento de una acción colectiva que puede darse de diversas formas. Sin embargo, será la acción colectiva contenciosa, propia de actores que no tienen acceso institucional y buscan reivindicaciones inéditas o no respetadas, los que utilicen a la “acción” como su recurso primordial para contrarrestar la represión de las autoridades. Tarrow, en el transcurrir del libro “El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política” planteará cómo los objetivos comunes, solidaridad, desafíos colectivos y la interacción colectiva, son los pilares del movimiento social que en los últimos años perderán preponderancia e institucionalidad, no buscando la trascendencia en el tiempo. Pueden llevar a cabo acciones colectivas de tres tipos: violencia, disrupción y convención, donde la primera es la que usualmente mimetiza los grupos, teniendo más riesgo a ser reprimidos; la segunda rompe con la rutina, al buscar nuevas formas discursivas y de accionar para ser escuchados por las autoridades, aunque son muy inestables y proclives a caer en violencia o pactar con las élites; la tercera se basa en acciones rutinarias, que las autoridades muchas veces legitiman produciéndose convenios entre sí. Estas características comunes de los nuevos movimientos sociales planteadas por Tarrow, muestra un panorama desalentador con respecto a la durabilidad de los movimientos sociales, lo que tienta a cuestionar la existencia de los mismos al solo considerarlos acciones colectivas, por la forma como se cohesionan y actúan para reivindicaciones instantáneas sin una verdadera consistencia a largo plazo. Mi opinión confluye con la de Tarrow, en tanto los movimientos sociales han perdido legitimidad e institucionalidad con el transcurrir de los años, relegándose a la sola realización de acciones colectivas coyunturales para la solución de algún problema que se de en el ámbito estudiantil, donde una vez solucionado el asunto está cohesión se disuelve al ser aplacada sin tener la necesidad de accionar o buscar perennidad en el derecho que le esté vulnerando las autoridades.

Los nuevos movimientos sociales aparecen en áreas de la reproducción cultural, la integración social y la socialización, siendo el paradigma de los nuevos movimientos sociales la contradicción entre el individuo y el Estado nuevos valores que cuestionan el estado de cosas, a partir de intereses sociales universales (Aranda, 2000: 230). Es así



como, bajo esta última óptica, los movimientos estudiantiles, como otros, buscan esencialmente reivindicar derechos con el fin de conseguir la ampliación de la democracia y el fortalecimiento de la ciudadanía, pues estos se convertirían en uno de los medios para hacer visibles las reivindicaciones, propuestas, demandas y problemas sociales siendo un espacio donde se crean y se recrean las identidades colectivas. De esta manera, los movimientos sociales serían construcciones continuas de ciudadanía activa y propositiva, que involucran a tantos sujetos como problemáticas sean visibilizadas. Esta teoría se enfoca en los cambios estructurales del sistema capitalista que han dado origen a los nuevos movimientos sociales, estableciendo una ruptura con el paradigma tradicional que veía a los movimientos sociales como expresión del enfrentamiento entre empresarios y obreros, como la teoría clásica marxista, que tenía como principal protagonista al movimiento obrero, siendo variantes actuales los movimientos estudiantiles, feministas, ecologistas y pacifistas en la actualidad. Estos movimientos no se perciben como clase obrera, hay nuevos actores, nuevos objetivos, y nuevas formas de acción social. La explicación radica en que el desarrollo del capitalismo, en los países industrializados fundamentalmente, fortaleció a un importante sector de clases medias que suministró la base social para los nuevos movimientos.

En ese sentido, para Alain Touraine, el movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta. Por ello, no se deben separar jamás las orientaciones culturales y el conflicto social; esto no ha sido posible en las sociedades pasadas. Asimismo, Touraine menciona en su texto “Los movimientos sociales”⁹ la existencia de tres tipos de conflictos que modifican los rasgos de la estructura social: *Conductas colectivas*: Se refiere a aquellas acciones que representan una defensa, reconstrucción o adaptación de un elemento enfermo del sistema social. *Lucha*: Se denomina así a los conflictos que buscan modificar sistemas de decisión, que actúan como factores de cambio y como fuerzas políticas. *Movimientos sociales*: Son las acciones conflictivas que buscan transformar las relaciones sociales de dominación que se ejerzan sobre los principales recursos culturales, la producción, el conocimiento, las reglas éticas, etc.

En base a estos conceptos, el movimiento estudiantil se desarrolla bajo una conducta colectiva, al tratar de restablecer derechos adquiridos con anterioridad a través de luchas constantes, como sucedía con las protestas estudiantiles del siglo XX tanto en Europa como en Latinoamérica. Las protestas estudiantiles tienen como finalidad



modificar los mecanismos institucionales que han permitido que sus derechos sean vulnerados. Se involucra directamente con las instituciones del Estado como es el Ministerio de Educación y las autoridades universitarias. Aunque muchas veces caen en el aspecto denunciativo y agitativo y no proponen la toma del poder político por no ser su prioridad.

El *movimiento estudiantil* es considerado, por la mayoría de especialistas, como el originador (creador) de los nuevos movimientos sociales. Una de sus características peculiares es el despliegue inagotable de imaginación juvenil, con diversos métodos de acción y representación de los problemas y propósitos que persigue, siendo el principal liberar a la sociedad civil del autoritarismo estatal y lograr un avance en la democratización de la vida política de la sociedad. (Aranda, 2000: 236/247). Las peticiones del movimiento estudiantil se caracterizan porque incluye dos tipos de reivindicaciones: unas de carácter gremial, relativas a su situación de estudiantes, como son la gratuidad de la educación, los sistemas de enseñanza, comedores estudiantiles y otros; y aquellos de índole política, como son el debate acerca de la condición de la Universidad y las posibilidades de participar en la conducción general de la sociedad, la política universitaria y la nacional. La cuestión es que no resulta fácil ni evidente la distinción entre los dos tipos de demanda, ya que generalmente se suponen mutuamente. Asimismo, se componen de masas de jóvenes en su mayoría pertenecientes a las clases medias depauperadas que participan esporádicamente, y grupos de activistas que continuamente están llevando a cabo acciones diversas que, de alguna manera, mantienen la actividad del movimiento.

Para Ortega, en la actualidad, “los estudiantes no constituyen una clase social definida por el lugar que ocupan en el proceso de producción. Su composición es heterogénea, aunque en su interior tienen un fuerte peso las capas medias” (2010: 130). De esta manera, es muy complicado, y hasta ilusorio, pretender una acción política homogénea, articulada y con un proyecto consensuado. Sin embargo, las dificultades compartidas: baja calidad docente, cobros indebidos, amenazas de privatización, entre otros, pueden generar acciones puntuales, sinergias colectivas, que, de alguna manera, se podrían convertir en iniciativas más trascendentes.

Teniendo más claro que es el movimiento estudiantil, como parte del movimiento social, es necesario entender que requiere de una identidad que movilice a sus miembros que lo conforman. Surge entonces la importancia del discurso, como ente homogeneizador e identitario de las masas organizadas o, en su defecto, que genere



simpatías y reconocimiento ante los demás quienes son parte de su entorno. Para ello, es necesario el análisis detallado del discurso como una de las maneras más sofisticadas de estudiar las representaciones sociales que, de otra manera, serían invisibles, como el conocimiento, las ideologías y las identidades sociales. (Atienza y Van Dijk, p.73) Conocer el discurso de los grupos o movimientos sociales es de suma importancia porque, identificada la cultura, creencia y simpatías afines de los grupos o movimientos en sí, el discurso permite distinguir las diferencias y el porqué de que no exista un movimiento o grupo común, a pesar que se tenga al mismo enemigo. Esto se explicaría porque el ser humano, sin ser consciente, evidencia los grupos sociales a los que pertenece a través sus experiencias personales, opiniones y emociones. (Atienza y Van Dijk, 2010) Los miembros de los grupos, son parte de los mismos según el grado de afinidad que tengan ya sea cultural o de índole meramente emocional. En cambio, Guerrero y Vega plantean que los discursos tienen funciones sociales y políticas, por lo que están fuertemente asociados a las ideologías, entendiéndolas como conectores sociopolíticos de cohesión con las masas. Es así como cumplen una función específica en delimitar y fijar el significado de conceptos con múltiples significados disponibles. (Guerrero y Vega, p.106). Los discursos se vuelven de carácter público y no cerrados, haciéndose visible para cualquier individuo que se encuentre en la búsqueda de encontrar identidad de pares ya sea institucionalizado (sindicados o partidos) o informal como es en los movimientos sociales. No obstante, Eagleton menciona que cada formación discursiva está inserta a su vez en una formación ideológica, que contiene tanto prácticas discursivas como no discursivas, dando a entender que todo discurso se sumerge a una ideología, pero esta no necesariamente se rige en su totalidad sino que va acompañada a otros elementos no necesariamente ideológicos, y esto no le quita su importancia por menos político que pueda parecer someramente (Eagleton, 1997)

El movimiento estudiantil, en el proceso histórico, se renueva constantemente, ya sea incorporando distintos participantes o cambiando los actores en diversos momentos, lo que implica una posibilidad de enriquecer y dar más fuerza al movimiento a través de nuevas propuestas acordes con la coyuntura económica, política y social. También esa necesaria rotación de los actores implicará diferentes formas de asumir el activismo, de concebir la lucha y de establecer los lazos internos de solidaridad con el resto de los compañeros(as).

El movimiento estudiantil presenta una clara diferenciación entre la ideología de los dirigentes y la de los integrantes de base. Los primeros generalmente cuentan con una



ideología bien definida, de carácter crítico, izquierdista o al menos no oficial; en tanto que las bases de estudiantes no tienen una ideología bien definida ni formada, aunque es claro que la identificación que se da con los líderes conlleva la aceptación o al menos simpatía por esos principios.

Cabe mencionar que los movimientos estudiantiles pueden registrar dificultades para lograr suficiente participación en problemas académicos y políticos por parte de la mayoría del estudiantado, debido tanto a su falta de compromiso político, como al esquema de participación impulsado por los dirigentes, que suelen “manejar” los asuntos con base en intereses, en ocasiones, ajenos al interés estudiantil inmediato o directo. He ahí una de las principales causas de la decadencia y la poca legitimidad que tienen respecto a la comunidad estudiantil.

En base a estos conceptos, el movimiento estudiantil se desarrolla bajo una conducta colectiva, al tratar de restablecer derechos adquiridos con anterioridad a través de luchas constantes, como sucedía con las protestas estudiantiles del siglo XX tanto en Europa como en Latinoamérica.

Discusión

La teoría obtenida hasta esta parte de mi investigación me ayudará analizar la situación del actual del “Movimiento estudiantil en la facultad de Ciencias Sociales en San Marcos” y a entender cómo el accionar de los dirigentes estudiantiles dentro del espacio universitario se relega a “acciones colectivas” para la obtención de algunas reivindicaciones que estos demanden, perdiendo transcendencia e institucionalidad en el tiempo tal como lo plantea Tarrow, quien marca una distinción de los que es un movimiento social y del que no es. Despejado este asunto, recorro al segundo autor que es Touraine, quien me ayudará a explicar cómo las acciones sociales ejercen una fuerza de presión o cambio, en base a los recursos culturales existentes en un determinado contexto, los cuales dirigen su accionar e imaginario colectivo. Me ayudaré también con la teoría del movimiento estudiantil planteada por Ortega, que menciona las limitaciones y condiciones del actual movimiento estudiantil, lo que coincide con la realidad en la que se encuentra la facultad de Sociales y el resto del movimiento estudiantil en la UNMSM.

Metodología

En el ámbito metodológico, esta investigación es de tipo cualitativa, pues más que explicar y predecir los hechos humanos, lo que busca es registrar y analizar la dinámica que se da en la interacción social del movimiento estudiantil de las organizaciones propias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM. Se apela al enfoque teórico



de los movimientos sociales propuesto por Sidney Tarrow, al explicar la existencia de acciones colectivas y la poca institucionalidad de los movimientos sociales contemporáneos. A su vez, se recurre a Alain Touraine para analizar la predisposición a agruparse por motivos culturales, sea este Makicha o APU, grupos que buscan la construcción del sentido de una realidad social, en este caso, de la realidad política universitaria, proceso que se desarrolla a nivel macro en la implementación de la nueva Ley Universitaria y a nivel micro en la convocatoria a elecciones para reconstituir el Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM.

Las unidades de análisis lo componen tres tipos de actores vinculados a mencionadas agrupaciones: dirigentes, ex dirigentes y simpatizantes. A través de las técnicas de investigación registré la información, utilizando la entrevista a profundidad, individual y grupal, con ayuda del diario de campo; guías estructurados en torno a ejes políticos, económicos, sociales y culturales; grabadora; cámara fotográfica, de ser necesario. Y la recolección de pronunciamientos tanto virtuales como físicos y el análisis de sus consignas plasmadas en banderolas y arengas en las acciones que realizan.

En el caso de las entrevistas, estas se realizaron temporalmente en los espacios entre clases, o en el horario más conveniente para los entrevistados. Otra situación que debe manejarse obedece a que los integrantes del movimiento estudiantil no son abundantes, motivo por el cual para realizar la investigación se buscará tomar las opiniones de la mayor cantidad de los integrantes.

Otra técnica que me facilitó el recojo de información es la etnografía, la cual me permitió el acceso a la Asamblea General de Estudiante (AGE), acciones de lucha y compenetración con los estudiantes partícipes del movimiento estudiantil, observando así sus conductas, forma de decir y pensar sus planteamientos, el cual forma su discurso. Pude realizar apuntes en la libreta de campo e interpretarlos paralelamente para luego seleccionar el significado del contexto en relación con la elaboración teórica que realicé al mismo tiempo, donde la observación participante es la principal estrategia metodológica de los estudios etnográficos y esta se justifica plenamente por la propia naturaleza del objeto de estudio. En el caso del Movimiento estudiantil, esta técnica me permitió contrastar las entrevistas realizadas a los actores sociales claves con la realidad por medio de una verificación directa de sus discursos, acciones y estilos de vida en su mismo hábitat (Facultad de Ciencias Sociales). Debido a que muchos de los integrantes, inmersos en el movimiento estudiantil, no me trataron como un agente



extraño a ellos sino como parte de su mundo y preocupación, pude obtener mucha información, en un marco de confianza, necesaria para este tipo de investigación.

Conclusiones

En el aspecto político las agrupaciones responden a una tendencia progresista de izquierda, pero sus objetivos de como se debe encaminar la lucha del movimiento estudiantil son diferentes. En el caso de Makicha, simpatiza con las ideas Marxistas-Leninista y Maoísta del siglo XX, pero en su praxis solo busca solucionar problemas prácticos y coyunturales que se suscitan en la facultad de sociales. En cambio, APU simpatizan con las ideas del socialismo del siglo XXI, el cual no buscan cambiar el statu quo de raíz, sino que buscan aplicar ciertas medidas como reformas para que este no afecte en demasía a la sociedad.

En sus acciones, tanto Makicha y APU caen en una política assembleísta, reducen la política a la participación de asambleas y es ahí donde se da la movilización de los recursos que sirven para la participación electoral dentro de la universidad. Makicha prefiere tener representatividad en los gremios; en contraste, APU prefiere tenerla en gremios y Consejo de Facultad. Las acciones que realizan estas agrupaciones son las marchas, plantones, asambleas y coordinaciones, mediante las cuales buscan promover la participación de los estudiantes ajenos a estos grupos políticos.

Las diferencias discursivas de las agrupaciones, tanto por el lado de Makicha y APU, radican en los objetivos de lucha. El primero considera que el movimiento estudiantil debería direccionarse hacia la lucha popular, sin tener muy claro el camino que después de vincular al pueblo con la universidad se deba seguir. APU considera que la lucha del movimiento estudiantil debe contextualizarle a la realidad universitaria actual, buscando reivindicar los derechos estudiantiles a través de reformas que mejoren las expectativas del estudiante sanmarquino de Sociales; a su vez, busca tener focos de injerencia política en la facultad de sociales para luego tener representatividad fuera de la universidad, es decir, cuotas de poder con las cuales ascender a una instancia político-partidaria externa a la universidad. En el caso de las diferencias culturales o estilos de vida de ambos grupos, las diferencias se deben al entorno el cual radican o crecieron. En el caso de Makicha, la mayoría de sus integrantes provienen de provincia y son resultado de sectores emergentes, por lo que su forma de vida y necesidades son diferentes a los de la otra agrupación. Mientras que ellos buscan la gratuidad de la educación, APU busca acabar con la corrupción y la deficiencia académica dentro de la facultad. Ellos provienen de sectores de clase media acomodada y baja proveniente de



los conos, por lo que su cultura y forma de pensar es más urbana. Considero que el factor cultural es el que marca la principal diferencia que obstaculiza la homogenización del movimiento estudiantil, porque no todos comparten el mismo objetivo ni carecen las mismas necesidades. Mientras que Makicha prefiere eliminar los costos económicos principalmente, las otras dos agrupaciones optarán por buscar mejoras administrativas o representatividad en el consejo de facultad. No existe un consenso entre las agrupaciones que conforman el movimiento estudiantil en Sociales.

Citas a pie de página

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

² Centro Federado de Ciencias Sociales.

³ Federación Universitaria de San Marcos.

⁴ Palabra quechua: Puño chiquito.

⁵ Articulación Popular Autónoma.

⁶ Palabra quechua que significa “Puño chiquito”.

⁷ Articulación Popular Universitaria.

⁸ En los momentos de mayor flujo, el movimiento estudiantil, por su composición y decisión, puede tender rápidamente a radicalizarse, y a resultar sumamente explosivo en cuanto a sus acciones. Es en este contexto donde estallan con fuerza -por tiempo prolongado o contante- los enfrentamientos con la policía y las “tomas”.

⁹ Cita extraída de Sztompka, P. (1995). Sociología del cambio social. Pág. 190.

¹⁰ Véase, Touraine, Alain (1991), Los movimientos sociales, Almagesto, México.

Bibliografía:

Aranda, J. (2000). El movimiento estudiantil y la teoría de los movimientos sociales. México.

Meyer, J. (2008). El movimiento estudiantil en América Latina. México. Colegio del México, núm. 68, pp. 179-195.

Ortega, M. (2010). Movimiento estudiantil, clase y subjetividad. En: Veredas No. 21; Año 11, Págs. 129-147. Disponible en: http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/12-533-7609rfk.pdf Fecha de consulta: 02 octubre de 2016

Sidney T. 1999, “Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales”, en Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid: Istmo, pp. 71-100.



Suarez y Sánchez (2015). "Tipos de izquierda y calidad democrática en América Latina." 1(1):57-70, jan-jul 2015, Revista cambia. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Tipos%20de%20izquierda%20y%20calidad%20democr%C3%A1tica%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf.

Tarrow, Sindy (1997), El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza Editorial, Madrid.

Touraine, Alain (1991), Los movimientos sociales, Almagesto, México.



Identidades políticas: Propuesta de marco analítico para su estudio.

Sofía Lanchimba Velastegui

Resumen

Desde la sociología, el estudio de los movimientos sociales y sus demandas específicas se ha consolidado como un ámbito específico. Sin embargo, hay que poner a debate los estudios que dejan de lado la dimensión socio-política y socio-histórica de dichos movimientos. La discusión en torno a la emergencia del sujeto y la metodología para su estudio aporta en la comprensión de lógicas de acción de los individuos de “carne y hueso”. No obstante, se ha renunciado a las visiones analíticas amplias y de conjunto y se ha perdido el vínculo entre acción colectiva y transformación socio-política.

Por ello, es importante posibilitar el diálogo de disciplinas y recuperar sus aportes para enfrentar los desafíos epistemológicos, teóricos y metodológicos a los que nos enfrentamos en el estudio de dichos movimientos. Un enfoque interdisciplinario y crítico permitirá enriquecer su estudio y avanzar a una mejor comprensión de éstos.

Con la preocupación en mente de cómo estudiar movimientos-agrupaciones políticos desde una perspectiva crítica, propongo un marco analítico para estudiarlos desde un enfoque interdisciplinario y crítico. En términos teóricos, desarrollo una posible conceptualización de la categoría de identidad política que incluye las siguientes variables: antagonismo, experiencia colectiva, *habitus* militante, cultura política, memoria colectiva subterránea y discurso político. En términos metodológicos, intento combinar tres niveles de análisis: las trayectorias militantes (micro), las trayectorias de las organizaciones (meso) y la temporalidad histórica (macro).

Palabras clave

Subjetivación política; Identidad política; Campo político; Capital militante; Historia política.

Introducción

Lo social tiene un carácter abierto y multiforme. La existencia de cierto orden sólo es posible a través de la fijación de sentidos relativos y precarios. Dicha precariedad permite su disputa. Es por ello que lo social se instituye como un equilibrio relativo y contingente. Las identidades no están determinadas por el contexto ni se crean de manera mecánica. Existe un proceso complejo de impugnaciones frente a dicho contexto en el que también cobra importancia la agencia de los sujetos.



Ninguna identidad política se produce en el vacío, por el contrario, está íntimamente ligada con el proceso histórico. La reconstrucción de las trayectorias militantes tiene como finalidad comprender las identidades políticas a través de las subjetividades y el despliegue de diferentes estrategias en distintos momentos histórico-políticos. Dado que toda identidad es dinámica, una revisión diacrónica permitiría ubicar sus desplazamientos.

Las identidades políticas no son una realidad pre-existente. Existen socialmente, pero son una construcción que se da en la esfera subjetiva y responden a determinados momentos históricos de politización y movilización. La definición propuesta por Didier Eribon aporta en el esclarecimiento: “la identidad no es ni realidad, ni un programa, ni un pasado, ni un futuro, ni un presente, sino un espacio de impugnaciones y de conflictos políticos y culturales. Lo que implica que no puede ser nunca totalmente estabilizada en un discurso único o unitario que pudiese encerrarlo en una comprensión fija” (Eribon, 1999: 110).

Para pensar la identidad hay que partir de una aporía respecto al sujeto. El sujeto es al mismo tiempo sujetado y soberano. En otras palabras, el sujeto es constituido por un proceso político que al mismo tiempo constituye. Foucault explica la sujeción en los siguientes términos:

[...el] poder se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que clasifica a los individuos en categorías, los jerarquiza, los designa por su propia individualidad, los ata a su propia identidad, les impone una ley de verdad que deben reconocer y que los otros deben reconocer en ellos. Es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos. Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otros a través del control y la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete. (Foucault, 1988: 7)

No obstante, como el mismo Foucault refiere, donde hay poder hay resistencia. Lo que faculta pensar una tensión permanente entre la sujeción y la resistencia a ser sujetado. La categoría de identidad política daría cuenta de una tensión entre el sometimiento a una identidad y la posibilidad de oponerse a dicha identidad asignada. El planteamiento hecho por Foucault ofrece algunos elementos para pensar que las identidades no se construyen en abstracto como tampoco de manera definitiva.



Identidad política

Las identidades políticas, tal como las planteo aquí, tienen ciertos componentes que las distinguen de otro tipo de identidades: una configuración a través del *antagonismo* o la definición de amigo y enemigo (Schmitt), la construcción de un nosotros a través de la *experiencia colectiva* de lucha (E. P. Thompson), un cierto *habitus* militante (Bourdieu-Poupepa-Pirker), una cultura política compartida, la apelación a una *memoria colectiva subterránea* (Pollak) y un discurso político.

Anexo 1: Gráfico 1

El antagonismo. La marcación de la frontera política entre un *ellos* y un *nosotros* o la definición de *amigo* y *enemigo* (Schmitt) es uno de los elementos más importantes para configurar identidades políticas. Dado que las identidades no están suturadas, éstas se reconfiguran en el conflicto. Se definen/redefinen en la oposición y alteridad.

La construcción de una identidad colectiva requiere una creatividad y una base material mínima sobre la cual se pueda enunciar un “nosotros”. Podemos convenir, entonces, que no hay identidades esenciales y puras que existan en el vacío, se configuran en la relación con otros.

Toda identidad se construye, en los términos de Laclau, en una determinada configuración discursiva, que, a su vez, es reconfigurada a través de la práctica articuladora. No existen identidades suturadas, sin embargo, es posible la fijación parcial de sentido por dos vías. Por un lado, en el antagonismo/alteridad a través del trazado de fronteras políticas. Por otro lado, en la construcción de cadenas de equivalencia o solidaridades en torno a un significante común. Por tanto, las identidades políticas siempre son dinámicas.

En la construcción de identidades se requiere una fijación parcial de sentido dado su improbable fijación última, la que sólo es comprensible a través de la articulación. Esta categoría ayuda a analizar el vínculo entre distintas identidades políticas modificándose unas a otras. “La práctica de la articulación consiste [...] en la construcción de puntos nodales que fijan parcialmente el sentido; y el carácter parcial de esa fijación procede de la apertura de lo social, resultante a su vez del constante desbordamiento de todo discurso por la infinitud del campo de la discursividad”. (Laclau y Mouffe, 2004: 154).

Las identidades tampoco constituyen internamente una unidad acabada, pues, constantemente tienen conflictos internos, particularmente si hablamos de identidades



políticas. Al interior de la identidad hay *desplazamientos continuos* sobre la base de las diferencias que coexisten en los individuos concretos.

La identidad no es más que el efecto de la articulación, mediante los principios clasificatorios de un determinado imaginario social, de los referentes reales [...] Para que un determinado referente (clase, raza, sexo, etnia, religión o lugar de nacimiento) devenga base de una diferencia identitaria, es preciso que previamente haya adquirido la condición de criterio definidor de la identidad [...] lo que hace el lenguaje no es simplemente nombrar a los sujetos, sino traerlos a la vida [...] fue la aparición de categorías como las de individuo racional, clase o nación lo que hizo posible que, a partir de cierto momento, las personas comenzaran a sentirse, experimentarse, comportarse y formular exigencias como tales. ((Cabrera 2003 citado por Domènech, 2016: 129)

Las identidades en ese sentido carecen de un supuesto metafísico o una esencia, tienen un carácter estrictamente relacional. La identidad política, por tanto, expresa una fijación parcial de sentido producto de una práctica articuladora que da cuenta de una configuración discursiva más amplia. Pues, la articulación es "toda práctica que establece una relación tal entre elementos que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa práctica". (Laclau, 2005: 142-143). Es decir, el hecho de "tomar conciencia de sí mismos" e identificarse como clase, etnia, pueblo, nacionalidad u otra identidad colectiva depende del tipo de interacción discursiva que se construya.

Experiencia colectiva. Las identidades políticas se forman en la experiencia colectiva de lucha (E.P. Thompson). La definición de un objeto de disputa y la forma de enfrentarlo son partes constitutivas de dichas identidades. En su libro, *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, E. P. Thompson ha realizado importantes contribuciones para el estudio de identidades y grupos. Su categoría *experiencia* entrelaza aspectos objetivos y subjetivos y se define relacionamente. Además, permite pensar una configuración de la subjetividad colectiva a partir del antagonismo-conflicto, o en términos de Bourdieu, a partir del concepto de campo de relaciones de fuerzas.

La forma en la que E.P. Thompson estudia las clases, como proceso histórico, también puede extenderse al estudio de otras identidades o grupos. En primer lugar, hay que establecer que la clase, los grupos o las identidades se forman en relación a otros. Luego, la existencia de un grupo no es anterior a su formación histórica. "La clase la definen los hombres mientras viven su propia historia y, al fin y al cabo, esta es su única definición". (Thompson, 2012: 29)



Para Thompson hay un entrecruzamiento de determinaciones objetivas con las representaciones subjetivas en la formación de la clase. En otras palabras, el proceso de formación social e histórica de un grupo es un proceso activo en el que intervienen tanto las condiciones materiales como la capacidad de los agentes para autodefinirse. La clase por tanto es parte de su propia formación.

La clase queda dibujada según la manera como los hombres y las mujeres viven sus relaciones de producción y según la experiencia de sus situaciones determinadas, dentro del «conjunto de sus relaciones sociales», con la cultura y las esperanzas, que se les han transmitido, y según como estos ponen en práctica esas experiencias a nivel cultural. Así que, en definitiva, ningún modelo puede darnos lo que debería ser la «verdadera» formación de clase en un determinado «estadio» del proceso: el modelo solo tiene valor heurístico, en un análisis comparativo, que, a menudo, puede resultar peligroso por su tendencia a una concepción estática. En la historia, ninguna formación específica de clase es más auténtica o más real que otra: las clases se definen de acuerdo con la manera como, de hecho, tiene lugar esa formación. (Thompson, 1991: 30)

La influencia de E.P. Thompson en las ciencias sociales, en especial en la sociología, está ligada al estudio de los sujetos como sujetos-en-proceso y los individuos como cuerpos socializados, en la misma línea de reflexión de Bourdieu.

El estudio que lleva a cabo Thompson sobre la clase se distancia de aquellos cuya existencia está condenada por la estructura. Literalmente dice “no veo la clase como una «estructura» ni siquiera como una «categoría» sino como algo que tiene lugar de hecho □ y se puede demostrar que ha ocurrido□ en las relaciones humanas” (Thompson, 2012: 27).

En Thompson hay una recuperación del sujeto y la experiencia colectiva como elemento esencial del proceso de construcción de las identidades. La categoría de *experiencia* es central en su estudio, pues, es la experiencia compartida la que generaba el sentimiento identitario, y, en consecuencia, el comportamiento de clase. El factor determinante para la conciencia de clase está ligada a la experiencia de explotación y los procesos de politización y movilización que los lleva a contar con representaciones y visiones compartidas (cultura).

Y la clase cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus experiencias comunes (heredadas o compartidas), sienten y articulan la identidad de sus intereses a la vez comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos de (y habitualmente opuestos a) los suyos. La experiencia de clase está ampliamente



determinada por las relaciones de producción en que los hombres nacen o en las que entran de manera involuntaria. La conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Podemos ver una cierta lógica en las respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias similares, pero no podemos formular ninguna ley. La conciencia de clase surge del mismo modo en distintos momentos y lugares, pero nunca surge exactamente de la misma forma" (E. P. Thompson 2012: 27-28).

En síntesis, se puede decir que la identidad se construye en un contexto, en una historicidad concreta. Además, es un proceso abierto en el que la misma experiencia y la agencia de los sujetos y las relaciones que se establecen entre éstos van reconfigurando la identidad. La identidad está por tanto plagada de conflictos e impugnaciones externas e internas. No obstante, es posible fijar ciertos sentidos que permita hablar de un "nosotros". La experiencia corpórea de la clase como experiencia de explotación, así como el entramado de relaciones cotidianas son la base material para una auto-definición.

Habitus militante (campo político, habitus, capital y mandatos). Lo social tiene dos formas de existencia para Bourdieu: posiciones y disposiciones. Las posiciones se cristalizan en lo que él denomina campo y las disposiciones en los *habitus*.

Las posiciones y las relaciones que se construyen en el campo no son neutrales, están marcadas por una determinada correlación de fuerzas (Bourdieu y Wacquant, 2008). Dado que las posiciones no son aceptadas como naturales y perennes por sus ocupantes, hay una permanente disputa por reconfigurar el campo y cambiar las relaciones de fuerzas. La posibilidad de su reconfiguración está íntimamente ligada a las estrategias que puedan desplegar sus ocupantes, las que, a su vez, están ligadas a las posiciones que ocupan.

En términos analíticos, un campo puede ser definido como una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas, en su existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación presente y potencial en la estructura de distribución de especies de poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, así como por su relación objetiva entre posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.) (Bourdieu y Wacquant, 2008: 134-135)



Para desplegar una estrategia tendiente a cambiar las relaciones de fuerza en un campo se requiere de un determinado capital (o fuerza). Para el autor hay varios campos actuando en el mundo social, uno de esos campos es el político. Para que éste se constituya en un campo se requiere una relativa autonomía y un objeto de disputa particular. “El campo político podía ser descrito como un juego en el cual el objeto (*enjeu*) es la imposición legítima de los principios de visión y de división del mundo social”. (Bourdieu, 2001: 22). En otras palabras, lo que se disputa al interior del campo político es la concepción del mundo. Esta lucha, como se ha descrito, enfrenta a jugadores con capitales desiguales.

Las posiciones de cada jugador son establecidas en el campo y sus disposiciones se cristalizan en los *habitus*. Con ello quiero decir, las formas de obrar, pensar y sentir, o las estructuras sociales que han sido interiorizadas e incorporadas por los individuos. La categoría de *habitus* de Bourdieu le permite alejarse de la dicotomía entre objetivismo y subjetivismo, pues el mundo social se corporiza. No hay una oposición entre individuo y sociedad, existen cuerpos socializados. La categoría de *habitus* está conectada con la formación de identidades, dado que “los individuos construyen colectivamente las instituciones y clasificaciones que les están asociadas; en cambio, estas últimas les dan principios de *identificación* que les permitirán pensarse y pensar el mundo” (Corcuff, 2013: 98-99).

La definición de *habitus* de Bourdieu está conectada con el enfoque histórico, pues, todo *habitus* se crea en relación a las condiciones históricas de posibilidad que permiten su desarrollo. Estas condiciones están referidas tanto a la historia general como a la personal (la trayectoria) y ambas están ligadas a las posiciones del individuo. El uso de la historia en búsqueda de las condiciones sociales de posibilidad es una de las más interesantes herramientas para favorecer la crítica.

La noción de habitus tiene varias virtudes: es importante para recordarnos que los agentes tienen una historia, que son el producto de una historia personal, de una educación asociada a un medio, pero que son también el producto de una historia colectiva y que las categorías de pensamiento, las categorías de entendimiento, los esquemas de percepción, los sistemas de valores, etc., son el producto de la incorporación de estructuras sociales”. (Bourdieu y Chartier, 2011: 70).

Hay que dejar en claro que el *habitus* no es un concepto determinístico, sino que éste puede cambiarse conforme la experiencia. “El *habitus* no es, pues, un destino; no es un factum, como han querido interpretar algunos; es un sistema de disposiciones abierto,



que va a quedar constantemente sometido a experiencias y que quedará, por ende, transformado por ellas” (Bourdieu y Chartier, 2011: 75). Resumiendo, podemos convenir en el peso que ejercen las estructuras materializadas en posiciones y disposiciones, sin embargo, también está la brecha que permite la agencia del individuo.

Para transformar las relaciones de fuerza o la misma estructura del campo se requiere de fuerza o capital y determinadas estrategias. El capital político es similar al capital literario, ambos se basan en la reputación y notoriedad (Bourdieu, 2001). La concepción sobre *habitus* en el ámbito político permite pensar las posturas que los individuos toman en función de las posiciones y los capitales que detentan.

Los jugadores que no tienen capitales para luchar en el campo político son marginados del juego. Por tanto, requieren inventar otro tipo de estrategias de carácter colectivo ligadas a la construcción de opinión colectiva. El despliegue de estrategias colectivas permite a su vez la constitución de grupos. Es decir, éstos se forman en la experiencia de lucha en términos de E. P. Thompson. Lo que es lo mismo decir que, existe la posibilidad de enunciar un “nosotros”, una identidad, que se articula cuando se ponen en marcha estrategias colectivas.

Pero esta complicidad (en el sufrimiento o en el desasosiego tácito a veces vergonzoso) sólo accede a la existencia y a la eficacia política a través de palabras o de conductas simbólicas que están dotadas de una carga emocional más fuerte que la palabra hablada o escrita y cuyo ejemplo privilegiado es la manifestación. Las palabras, palabras de explicitación que hacen ver y hacen creer, o consignas, que hacen actuar de forma concertada, son principios unificadores de la situación y del grupo, signos movilizados que permiten constituir la situación y construirla como algo común al grupo. (Bourdieu, 2001: 45)

Ahora, es cierto que “la resistencia a la dominación no es espontánea: es necesario estar en situación de analizar la situación, de sentirse autorizado a juzgar y a evaluar”. (Poupeau, 2007: 9). Es decir, se requiere de una serie de disposiciones y saberes que permitan poner en suspenso la dominación, cuestionarla y estar dispuesto a enfrentarla. Esta serie de disposiciones y saberes son definidas por Poupeau como capital militante, en sus términos:

Hablar de capital militante, es insistir en una dimensión del compromiso, del cual el capital político da cuenta de manera insuficiente. En efecto, el capital político puede ser considerado como una forma de capital simbólico, “crédito fundado en las innumerables operaciones de crédito por las cuales los agentes confieren a una persona socialmente



designada como digna de confianza los poderes que ellos le reconocen”. [...] El capital militante se distinguiría entonces del capital político que es, en buena medida, un capital de función nacido de la autoridad reconocida por el grupo y en ese sentido, “inestable”: incorporado bajo las formas de técnicas, de disposiciones a actuar, intervenir, o simplemente obedecer, recubre un conjunto de saberes y de saber-hacer movilizables durante acciones colectivas, luchas inter o intra-partidarias, pero también exportables, convertibles en otros universos, y, así, susceptibles de facilitar ciertas “reconversiones”. (Poupeau, 2007: 40-41)

El capital escolar constituye una condición para el capital militante. Sin embargo, éste ni es suficiente ni necesario, justamente, el compromiso militante puede ser capaz de crear procesos de formación fuera de la escuela y centrarse al interior del partido, colectivo, etc. (Poupeau, 2007). El capital militante del que habla Poupeau “...se adquiere pues, y en gran medida, en el campo político, que allí se valoriza, pero también que se reconvierte en otros lugares, en caso de salida”. (Poupeau, 2007: 39).

La reconversión del capital permite comprender, por ejemplo, el acceso al juego político de aquellos que lo impugnaban o quienes han reconvertido dicho capital hacia la academia. La característica principal del capital militante es que éste se materializa como un saber-hacer adquirido en el proceso de formación y que juega un determinado papel en la organización □su mantenimiento□ y en los procesos de activación política.

...el capital militante puede así existir bajo tres formas: en estado incorporado, como conjunto de disposiciones corporales, lingüísticas e intelectuales para producir las actitudes más esperadas por el medio, gracias a las técnicas políticas indispensables para dirigir un grupo, o realizar una acción; en estado objetivado, bajo la forma de cultura política materializada en los libros, revistas, carteles, fotos, pero también bajo la forma de locales, de material (banderas, pancartas, etc.) o de personal organizado disponible y movilizable para conducir una acción, producir un informe, etc.; en estado institucionalizado, bajo la forma de puestos que pueden ocuparse o ponerse a disposición de sus camaradas, en el nivel local o nacional: secretario sindical, responsable de sección de un partido político, diputación electa local, o cualquier otra forma de puestos ligados a ese tipo de instituciones. Estas tres dimensiones están evidentemente vinculadas: la facultad de movilizar eficazmente esos recursos materiales u organizacionales no es independiente de la incorporación exitosa de disposiciones militantes. (Poupeau, 2007: 10-11)

La reflexión que aporta Poupeau en torno al capital militante es enriquecedora para observar las condiciones de posibilidad de constitución de una militancia, el tipo de capital que un individuo puede adquirir en un espacio militante y sus posibles



reconversiones en otros campos. Adicionalmente, su trabajo aporta luces para observar cómo se produce la diferenciación al interior de la militancia entre aquellos que son más “aptos” para adherirse al juego político o reconvertir el capital militante en otros campos. Pues, no todos los militantes llegan al espacio de militancia con los mismos capitales.

Poupeau también advierte sobre las formas en las que la adquisición de un capital militante bien puede significar la oportunidad de reconocimiento. Éste sumamente valorado por quienes viven procesos de desclasamiento (Poupeau, 2007).

En el proceso de formación militante se van incorporando no sólo un capital sino también un cierto *habitus*, es decir, se incorporan unas disposiciones mentales y corporales. Kristina Pirker define el *habitus* militante como la “conjunto de competencias y habilidades” (Pirker, 2017: 50) ligadas a la militancia y cuya conformación “es siempre histórico, es decir, consecuencia de un momento y un lugar dados” (Pirker, 2017: 50). Dicho *habitus* va moldeando un cierto comportamiento y saber-hacer que no sólo se pone en juego como capital sino también como un mandato.

María Olga Ruiz que estudió tres organizaciones revolucionarias, a saber, Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), Montoneros y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) habla de cómo la militancia opera también como mandato. Para la autora, “la militancia imponía a los militantes –en especial a los profesionales o de tiempo completo- mandatos y estrictos patrones de conducta” (Ruiz, 2015: 168). La formación militante no implica únicamente una socialización de orden ideológica, es, en gran medida, una comunidad que comparte valores y una moral específica que requiere de sus miembros un determinado comportamiento. Dichos mandatos pueden ser definidos como “modos de comportamiento claramente establecidos [...escritos o no]” (Ruiz, 2015:168) que debían encajar con la moral revolucionaria de vertiente guevarista y ligada al “Hombre Nuevo”. Dichos mandatos no operan sólo en el campo militante, también, “organizan y estructuran la vida diaria” (Ruiz, 2015).

Memoria colectiva subterránea. La memoria estructura un sentido compartido a las identidades políticas tanto como fuente de “héroes”, “batallas”, “mártires” y “victorias” como tradición de valores y simbolismos compartidos. Es decir, en el sentido descrito por Benjamin, las identidades políticas apelan a una tradición que “se nutr[e] de la imagen de los ancestros esclavizados y no de los nietos liberados” (Benjamin en Löwy, 2002: 126).



La memoria □a saber, las representaciones colectivas del pasado tal como se forjan en el presente□ estructura las identidades sociales al inscribirlas en una continuidad histórica y las dota de sentido, es decir, de un contenido y una dirección. [...] Las estructuras elementales de la memoria colectiva residen en la conmemoración de los muertos. (Traverso, 2011: 16)

Para ello es preciso el análisis de la memoria en su doble significado: las memorias individuales y la memoria colectiva en tanto “representaciones colectivas del pasado”. Es decir, como recuerdo subjetivo elaborado desde el presente. La memoria no es el recuerdo de una experiencia tal y como sucedió, no está fijada. Es una mirada del pasado reconfigurada desde el presente. “...se parece más bien a una obra abierta, en transformación permanente... La memoria es una construcción, siempre filtrada por conocimientos adquiridos posteriormente.” (Traverso, 2011: 22).

Uno de los primeros autores en trabajar sobre memoria, Maurice Halbwachs, sostiene un entrelazamiento entre memoria colectiva y memoria individual. Pues, para el autor “todo recuerdo, por personal que sea, está relacionado con un conjunto de nociones que no poseemos sólo nosotros, sino con personas, grupos, lugares, fechas, palabras y formas del lenguaje y también con razonamientos y con ideas, es decir, con toda la vida material y moral de las sociedades de las que formamos o hemos formado parte” (Halbwachs, 2004: 55). La memoria, por tanto, está entretejida socialmente y hay una permanente negociación para conciliar su expresión individual y colectiva.

La memoria colectiva es la condición de la memoria individual que a su vez cada persona contribuye a crear. Sin embargo, hay que anotar que un individuo puede inscribirse en distintos grupos/colectivos. Los esquemas teóricos y políticos son importantes en la conformación tanto de una memoria individual como una colectiva, pues, van configurando la identidad política. La memoria colectiva permite una adhesión afectiva y pertenencia a un grupo que trasciende la individualidad y dota una dimensión de sentido compartido.

Pero no todas las memorias tienen el mismo estatus. Hay memorias “fuertes” y memorias “débiles”, memorias nacionales construidas y fortalecidas desde el Estado y memorias subterráneas cuya existencia es marginal. “La frontera entre lo decible y lo indecible, lo confesable y lo inconfesable, separa [...] una memoria colectiva subterránea de la sociedad civil dominada o de grupos específicos, de una memoria colectiva organizada que resume la imagen que una sociedad mayoritaria o el Estado desean transmitir e imponer” (Pollak, 2006: 24).



Si bien la memoria reciente de la izquierda parecería haber desaparecido, ésta sigue permeándose a través de una cultura de izquierdas (símbolos, héroes, canciones, celebraciones, lugares, etc.) y expresándose a través de un cierto *habitus* militante.

En el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, la memoria ha sido uno de los elementos que permite encuadrar su identidad política, su irrupción en el escenario nacional y la disputa por el reconocimiento del estatus de sujetos históricos. “En América Latina, la memoria indígena se expresó en las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento del continente como una memoria antagonista, directamente opuesta a la memoria oficial de los Estados que nacieron con la colonización y el genocidio” (Traverso, 2011: 53). Es decir, las memorias colectivas subterráneas han pervivido por distintas vías, aunque, no hayan sido las dominantes. Y también son reelaboradas de acuerdo al momento político que deben enfrentar.

Estrategia metodológica y analítica

La estrategia metodológica consiste en un entrecruzamiento de procesos histórico-políticos, trayectorias de las organizaciones-agrupaciones políticas con trayectorias y relatos de vida de militantes. En otros términos, lograr una conexión de los cambios, permanencias y desplazamientos de las identidades políticas en tensión con el contexto general, en especial con los eventos políticos.

Tanto la reconstrucción histórica como las trayectorias de vida son metodologías que permiten observar lo que cambia y permanece. Éstas se encuentran ligadas con la categoría central de estudio: identidad política. Las identidades nunca están fijadas y pueden superponerse unas a otras. Es decir, estudiar al sujeto como un sujeto en proceso □nunca estático□.

Conclusiones

Del recorrido teórico se puede rescatar algunos principios analíticos y posturas metodológicas.

- La categoría de identidad política permite estudiar al sujeto como: sujeto- en-proceso. Es decir, como un espacio de impugnaciones y abierto a los cambios.
- Estudiar las identidades como cuerpos socializados y al individuo como una de las formas de existencia de la sociedad. De esta manera se puede reconocer el peso de las estructuras, pero también la posibilidad de la agencia de los sujetos.



- La historización y la revisión genealógica de los grupos políticos permite observar la conexión de lo específico con un contexto general.
- La excavación de las condiciones sociales de posibilidad facilita la observación de aquello que hizo posible el surgimiento de un discurso y su correspondencia con una práctica.

Anexo

Categoría	Variable	Definición operativa
Identidad política	Antagonismo.	Amigo/enemigo. Posturas frente a los eventos políticos. Ellos/nosotros. Frontera política. Objeto de la disputa. Conflicto.
	Experiencia colectiva.	El sujeto se forma en la lucha. Movilizaciones, levantamientos.
	<i>Habitus</i> militante	Conjunto de competencias y habilidades ligadas a la militancia.
	Cultura política.	Sentidos compartidos, valores.
	Memoria colectiva subterránea	Memoria colectiva subterránea. Rastrear conmemoraciones. Elaboración de un relato.
	Discurso político	Proyecto/sujeto/programa/estrategias/acuerdos mínimos.

Gráfico 1. Elaboración propia.

Bibliografía

Benjamin, Walter (2008). *Las tesis sobre el concepto de historia*. Ciudad de México: Editorial Ítaca.

Bourdieu, Pierre (2001). *El campo político*. La Paz: Plural Editores.

Bourdieu, Pierre y Loïc Wacquant (2008). *Una invitación a la sociología reflexiva*.

Buenos Aires: Siglo XXI.

Bourdieu, Pierre y Roger Chartier (2011). *El sociólogo y el historiador*. Madrid: Abada Editores.

Corcuff, Philippe (2013). *Las nuevas sociologías*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores.

Domènech Sampere, Xavier (2016). La condescendencia de la posteridad. Lucha de clases, clases y conciencia de clase. En Sanz, Julián; Babiano, José y Francisco Erice (eds.). *E. P. Thompson. Marxismo e historia social*. (pp. 115-152). Madrid, España: Siglo XXI.

Foucault, Michel (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 50, No.3. pp.3-20.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (2004). *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.



Poupeau, Franck (2007). *Dominación y movilizaciones. Estudios sociológicos sobre el capital militante y el capital escolar*. Córdoba, Argentina: Ferreyra Editor.

Thompson, Edward P. (2012). *La formación de la clase obrera en Inglaterra*.

España: Capitán Swing.

Thompson, Edward P. y Josep Montes Pérez (1991). Algunas observaciones sobre clase y "falsa conciencia". *Historia Social*, (10), 27-32.

Ulianova, Olga (2007). *Redes políticas y militancias. La historia política está de vuelta*. Santiago de Chile: Ariadna ediciones.



Movimentos sociais, educação popular e a descolonização do saber.

Danilla Aguiar¹

Resumo

As novas relações na América Latina no campo do saber apresentam um desafio extraordinário, porque os problemas que confrontamos em termos de desigualdades existentes no mundo que aprofundam e evidenciam o dismantelamento da reprodução humana em favor de uma lógica de acumulação de capital, nos obrigam a responder teoricamente a partir da nossa realidade sobre as necessidades de rupturas fundamentais com um sistema que se faz presente não apenas no terreno da economia, ou num terreno cultural distante, mas que também se evidencia no tipo de conhecimento que produzimos ou que nos amparamos. Este cenário nos exige pensar novas epistemologias que apresentem resistência à hegemonia de uma matriz cultural e epistêmica eurocêntrica, demanda que surgiu da organização e das lutas de movimentos sociais emancipatórios relacionados em grande medida a práticas de educação popular. Nossa hipótese é que há uma possibilidade aberta pela teoria decolonial, e uma tendência na teoria social e na educação contemporânea no subcontinente, de consolidação de novas epistemologias que convidam a buscar novas formas de pensar e de atuar politicamente, inseridas nas discussões sobre novas epistemologias do Sul. Os movimentos sociais protagonizaram lutas sociais importantes nas últimas três décadas e que se reflete em mudanças nos marcos da descolonização do saber. Nosso percurso teórico-metodológico, ao passo que é produto, contribui para gerar um espaço de discussão e reflexão sobre o elo orgânico entre lutas e resistências populares em distintos momentos históricos e o pensamento crítico, pertinente para contribuir com os estudos sobre a realidade latino-americana.

Palavra chave

Movimentos Sociais; Descolonização do saber; Epistemologias do Sul.

Introdução

Há menos de duas décadas, o subcontinente latino-americano experimentava um intenso momento de lutas, ilustrando algumas transformações no cenário político regional. O triunfo eleitoral de Hugo Chávez na Venezuela, em 1998, o fracasso da ALCA (Área de livre comércio das Américas) e, em contrapartida, o projeto de construção da ALBA (Aliança Bolivariana para os povos de nossa América), o estopim



da crise capitalista em 2008 e as lutas por nacionalizações na Bolívia e Equador seguidas pela primeira ascensão presidencial de Evo Morales (2005) e Rafael Correa (2006), respectivamente, sinalizavam mudanças na geopolítica da América Latina. São governos que articularam institucionalidade e pautas nacional-populares num projeto de caráter heterogêneo e continental e que reascenderam – ao menos em discurso – na dimensão política uma tentativa de ruptura com as estruturas de poder e cultura antidemocrática que minavam a credibilidade das instituições políticas locais, trazendo a substituição das constituições em vigor e renovação dos quadros políticos dirigentes.

Somando-se aos governos nacional-populares latino-americanos da época, na ausência de uma caracterização mais adequada, podemos citar ainda o caso do Brasil com a era Lulo-petista (incluindo as presidências de Lula da Silva e Dilma Rousseff), da Argentina com Néstor e Cristina Kirchner, a primeira eleição de Tabaré Vázquez, em 2005, e de Michele Bachellet, no Chile, em 2006. Salvaguardando as particularidades nacionais, são governos que inauguraram uma agenda de alternativa política às estruturas de poder vivenciadas desde a terceira onda democrática em meados da década de 1980 e que se instalam no aparelho do Estado. É importante lembrar que mesmo antes da crise capitalista que eclode no centro imperialista estadunidense em 2008, a América Latina aparecia como um subcontinente em ebulição, onde vários movimentos sociais despontaram na cena política na última década do século passado, tendo como exemplo as pioneiras rebeliões zapatistas em 1994, no México e a atuação dos *piqueteros*, na Argentina à mesma época, assim como na resistência dos mapuches no Chile e nas inúmeras lutas das nacionalidades no Equador, Peru e Bolívia. São movimentos sociais que fundamentalmente retomam as lutas pela autonomia das etnias, pela libertação nacional, e, principalmente, pela nacionalização dos recursos naturais.

Essas mudanças sócio-políticas eram estimuladas em grande medida pelas demandas e atuações dos movimentos sociais da região contra a ofensiva imperialista e a onda de privatizações que assolava o continente fundamentalmente a partir da década de 1990. Neste ensejo, partimos do pressuposto de que as novas relações na América Latina no campo do saber apresentam um desafio extraordinário, porque os problemas que confrontamos em termos de desigualdades existentes no mundo que aprofundam e evidenciam o desmantelamento da reprodução humana em favor de uma lógica de acumulação de capital, nos obrigam a responder teoricamente a partir da nossa realidade sobre as necessidades de rupturas fundamentais com um sistema que se faz presente não apenas no terreno da economia, ou num terreno cultural distante, mas que



também se evidencia no tipo de conhecimento que produzimos ou que nos amparamos. Neste trabalho, que se apresenta como uma pesquisa em construção, fundamentalmente o debate que se postula trata sobre as possibilidades e projeções de outras maneiras de questionar, de outras formas de pensamento crítico que dialogam com os movimentos sociais e que refletem o compromisso com a luta social incluindo disputas epistêmicas que envolvem a descolonização da educação.

Novas epistemologias e os movimentos sociais na América Latina

Seguindo esta reflexão, se faz oportuno o questionamento sobre para quem tem servido as pesquisas e a que interesses têm se alinhado a formação teórica acadêmica. Essa questão se relaciona diretamente com nossa própria atividade intelectual, com nossa reprodução e reinvenção, mas, sobretudo, com a construção de outra forma de organização da sociedade, sob outra hegemonia. Então, o debate que se trava sobre as possibilidades e projeções de outras maneiras de questionar, de outras formas de pensamento crítico e de diálogo com outros saberes tem que estar no centro dessa preocupação, principalmente se estamos pontuando um debate *desde e para* a América Latina. Contudo, não se trata de ter como ponto de partida a análise local, nacional, regional e perder a *mediação* para se analisar o todo.

A colonização e o pensamento europeu trouxeram para o subcontinente latino-americano não só a marca da dependência financeira, mas, foram cruciais, sobretudo, à expansão de uma influência intelectual e um colonialismo cultural que, junto com a propriedade privada, marcaram nossa formação econômico-social e – decisivamente – nosso sistema educacional. Em contrapartida, há algumas décadas, um conjunto heterogêneo de forças políticas que se colocavam como alternativas ao neoliberalismo com um destacado protagonismo de movimentos sociais retoma as lutas pela autonomia das etnias, pela libertação nacional e pelo reconhecimento junto a uma demanda por descolonização pela via democrática. São mudanças políticas que trazem à baila novas questões teóricas para se pensar a América Latina contemporânea, recobrando o tema da identidade, da multiculturalidade, ao passo que se trava uma aproximação entre a história latino-americana, a formação excludente dos Estados-nação, bem como o questionamento da herança colonial dentro dos atuais padrões de poder/saber.

Na esteira deste debate, parte da teoria social latino-americana e seus representantes vêm reivindicando contemporaneamente um *giro decolonial*, um rompimento com o ocidental-centrismo e seus reflexos no saber, uma demanda que surge pela expansão do argumento pós-colonialidade e dos estudos subalternos, num sentido gramsciano do



termo. Os intelectuais desta corrente – presente em várias universidades latino-americanas e estadunidenses, porém ainda com uma recepção tímida no Brasil – propõe uma nova perspectiva epistemológica proveniente dos subalternos da diferença colonial como grande contributo ao debate acadêmico. Michel Löwy destaca acertadamente a fundamental contribuição da corrente de pensamento decolonial: a crítica radical e profunda da visão ocidental-centrista ao passo que resgata a produção teórica latino-americana (Löwy: 2015).

São discussões interdisciplinares que contribuem decisivamente com a renovação do pensamento crítico por novas epistemologias do sul e pelo rechaço à naturalização da desigualdade social no subcontinente e no Brasil, ressaltando o legado dos movimentos sociais para uma educação popular e descolonizadora.

É certo que a América Latina cumpriu e cumpre um papel chave na consolidação do capitalismo na forma imperialista, e que a partir do processo de colonização, um capitalismo *sui generis* se instala no subcontinente partindo da utilização de subjetividades como a racialização da sociedade para impor, além da exploração no trabalho, a opressão social. Toda organização territorial, organização política e cultural começa na colônia como produto de negócios estrangeiros, maximizando as transferências de recursos para a Europa. Refletir sobre essa forma de organização é refletir fundamentalmente sobre as particularidades da formação econômico-social do subcontinente, uma discussão atrelada à discussão sobre a revolução latino-americana, se entendemos que só se conclui o processo de formação social com uma mudança estrutural profunda, logo, revolucionária. Essa discussão não atinge de maneira decisiva nem o debate público, tampouco espaços de formação, como as universidades. O movimento decolonial intenciona justamente avançar com este debate, ao desvendar a lógica da colonialidade (do poder, do saber e do ser) como a “face oculta da modernidade”, assim, indissolúvelmente ligada à criação e desenvolvimento do mundo moderno. Importante ressaltar que a colonialidade é baseada na classificação apoiada na lógica imperial e que sobrevive mesmo com o fim do colonialismo, uma classificação racial, étnica, sexual, patriarcal, entre outras que se combinam e que incutem um tipo de subordinação nos diferentes níveis de vida individual e coletiva.

Seguindo esta reflexão, entendemos que aprofundar o debate sobre a educação e a descolonização do saber, se faz mister para compreender que este cenário de novas epistemologias que apresentam resistência à hegemonia de uma matriz cultural e epistêmica eurocêntrica surgiu das lutas de movimentos sociais emancipatórios



relacionados em grande medida a práticas de educação popular. No Brasil, apesar de estarmos iniciando os estudos sobre a decolonialidade – em comparação aos outros países do subcontinente – é sabido que as lutas dos movimentos sociais, com protagonismo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e das organizações da Via Campesina Brasil, avançou-se em termos de “reivindicação da democratização do acesso à educação para os povos do campo no marco das políticas públicas” (Barbosa e Rosset, 2017: 22).

Faz-se necessário partir do acúmulo teórico de autores latino-americanos, a exemplo de Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter D Mignolo, Catherine Walsh, e também de fundamentais pensadores que dialogam com a educação emancipadora, a exemplo de Paulo Freire, Orlando Fals Borda e Boaventura de Sousa Santos para avançar teoricamente nos pressupostos da descolonização do saber. Estes autores nos indicam possíveis novos paradigmas aportados pelos saberes não-eurocêntricos mediante conceitos, debates e contribuições que nos levam a pensar práticas e atores sociais a partir de diferentes relações sociais originadas em distintas epistemologias. Partem do estudo das relações sociais e da cultura, compreendendo que não é possível fazer uma educação sem conhecer o educando, sem partir da sua realidade. Ou seja, atuam para reagir à educação tradicional que ajusta o indivíduo a uma realidade que oprime e silencia grupos e sujeitos históricos.

Nossa hipótese é que há uma possibilidade aberta por essas teorias de consolidação de uma tendência na pesquisa em educação contemporânea latino-americana – incluindo a brasileira – de novas epistemologias que convidam a buscar novas formas de pensar e de atuar politicamente, inseridas nas discussões sobre novas epistemologias do Sul e debates sobre a colonialidade. São mudanças que promovem a renovação crítica do conhecimento (e também na maneira que esse conhecimento é repassado via educação) desde uma perspectiva política e intelectual, de emancipação de situações de opressão diversas, definidas a partir de fronteiras de gênero, étnicas ou raciais, entre outras, e, fundamentalmente, de classe. São demandas abertas pelos movimentos sociais que protagonizaram lutas nas últimas três décadas e que se reflete em mudanças na nos marcos da educação brasileira contemporânea.

Descolonização do saber e a renovação crítica do conhecimento

Nosso percurso teórico-metodológico, ao passo que é produto, contribui para gerar um espaço de discussão e reflexão sobre esse elo profundo entre resistências em distintos



momentos históricos e locais geográficos, pertinente para contribuir com os estudos sobre a realidade regional latino-americana.

Mostra-se pertinente reconhecer a importância de debater a colonialidade, a descolonização do saber/poder e os rumos da educação popular, nosso objetivo, visto que essa discussão possibilita destacar o papel dos Movimentos Sociais nos processos de aprendizagem para uma educação emancipatória e na constituição dos sujeitos coletivos – a partir da cultura, identidade, sociedade. No cenário de pesquisa nacional, ao enfatizarmos o caso do Brasil, encontramos alguns trabalhos que trazem relevo para a temática da descolonização, como os debates indicados por Miguel Arroyo (2015), Danilo Romeu Streck e Telmo Adams (2012), Barbosa e Rosset (2017) e João Colares da Mota Neto (2018). Esses dados manifestam a relevância do debate do decolonialidade no âmbito da interdisciplinaridade e mais precisamente no campo da educação popular, onde buscamos também fundamentos da Filosofia da Práxis num sentido gramsciano do termo e suas contribuições para a educação, na medida em que nos aproximamos decisivamente do debate sobre educação popular emancipadora, sobre aqueles a quem a palavra havia sido negada (Freire, 1977) e sua história silenciada pelas narrativas hegemônicas (Gramsci, 2002).

Os saberes modernos hegemônicos do ocidente passaram a ser “submetidos a uma ampla crítica nas últimas décadas denunciando seu caráter eurocêntrico e colonial”, como indica Edgardo Lander (2005). São reflexões que demonstram que as ciências têm sido funcionais a uma polarização de mundo, e que as formas de dominação que surgiram no processo de colonização europeu continuam atuando contemporaneamente sob a forma da colonialidade.

Um conjunto diversificado de autores compõe hoje movimento “giro decolonial”, um dos mais importantes coletivos de pensamento crítico de intelectuais majoritariamente latino-americanos, surgido ainda em meados da década de 1990. O pensamento decolonial emerge após a maturação de um processo de mudanças que as Ciências Humanas em geral vinham enfrentando, principalmente na América Latina no que se refere à sua (re)construção por diferentes correntes de pensamento crítico, refletindo-se através de um movimento interdisciplinar, um projeto que, segundo Catherine Walsh, provoca fissuras na ordem hegemônica moderno-colonial, apresentando potencial instigante para a reflexão sobre interculturalidade, relações étnico-raciais de subalternidades que coincidem no subcontinente, formando propondo ainda uma nova maneira de encarar a produção do conhecimento e a educação (Walsh, 2013).



O grupo objetiva analisar a maneira que o mundo se desenvolve na atualidade, partindo desde a investigação da política global e das relações sociais de modelos e teorias de conhecimento que sirvam para interpretar as diferentes temporalidades e localidades de poder e de conhecimento na América Latina. Ao recuperar criticamente o ethos científico ao passo que se verifica a aplicabilidade de categorias para a realidade latino-americana, o pensamento decolonial propõe a criticidade das teorias e epistemologias estabelecidas, inclusive de teorias contestadoras como a pós-colonial e, muitas vezes, o próprio marxismo. Se por um lado a colonização impunha uma hierarquia dos seres, a colonialidade aparece como uma experiência onde se verifica múltiplas formas de subalternização, chamadas inicialmente pelo feminismo negro de interseccionalidades. Trata-se, pois, de estabelecer a teoria social latino-americana composta por intelectuais conscientes e críticos, segundo definições dos autores dessa corrente.

A epistemologia colonial foi determinante para que o colonialismo fizesse da América Latina uma sociedade colonialista fundacional, onde, pela primeira vez a colonização e o racismo agiam em favor do capitalismo (Ballestrin, 2012). Vários autores destacam que o fenômeno da colonialidade representaria o lado obscuro da modernidade (Quijano, 1992; Mignolo, 2010). Ao trazer ao debate o colonialismo como uma das formas contemporâneas de dominação, os autores do Grupo Latino-americano de Estudos Subalternos e, posteriormente, o Grupo Modernidade/Colonialidade buscam fundamentalmente romper esse ciclo e avançar em termos de independência, libertação e emancipação das sociedades exploradas pelo racismo, imperialismo e neocolonialismo. Enrique Dussel, como um dos precursores desse movimento desenvolveu sua primeira obra teórica, *Filosofía da Libertación en la América Latina*, de 1975, onde propunha uma mudança no ponto de partida do estudo, tendo como base o oprimido, indo de encontro às tendências modernas da época. Tratava-se de uma tarefa interdisciplinária empreender um giro descolonizador no saber e na teoria latino-americana. Essa guinada epistemológica modificaria a forma de se produzir saberes partindo do sistema do método, utilizando-se da dialética e totalidade para as formulações dessa corrente clássica decolonial (Dussel, 1977). Dussel designava como ponto de partida, ainda em meados da década de 70, o pensamento e a realidade latino-americana, propondo uma guinada epistemológica e metodológica, antecipando a negação de um horizonte eurocêntrico, como proposto pela teoria pós-colonial e pelos estudos subalternistas. No âmbito da educação, a teoria de Dussel se assemelha às propostas de Paulo Freire e Orlando Fals Borda, assim como se reflete nas recentes publicações e teses de Catherine Walsh sobre a pedagogia decolonial.



Já o peruano Aníbal Quijano, um dos fundadores desse movimento de intelectuais no subcontinente e que na atualidade se articulam sob a forma do argumento decolonial, clarifica o que se entende como colonialidade:

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial de poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial/étnica da população mundial como pedra angular de um dito padrão de poder e opera em nada um dos planos, âmbitos e dimensões, materiais e subjetivas, de existência social e cotidiana e a escala societal. Se origina e mundializa a partir da América. (Quijano, 2005, p. 342)

Quijano nos aponta que o conceito de “colonialidade no poder/saber” exprime essa nova forma de legitimação das relações de dominação, como divisão racial do trabalho, e a difusão de um aparato educacional uno, europeizado, que legitimariam nossa dependência financeira e intelectual. Isto significou a validação das antigas ideias e práticas de relações de superioridade/ inferioridade numa perspectiva moderna, ainda segundo o autor. A *colonialidade do saber* corresponde à influência da dominação eurocêntrica nas estruturas de pensamento e nas instituições educativas, criadas na época da colonização com o objetivo de perpetuar os valores eurocêtricos e que tem influência ainda hoje. Esses movimentos são exemplo de resistência frente a essa colonialidade do saber (Quijano, 2005).

Streck e Adams (2012, p. 247) indicam que o cenário de propostas metodológicas que apresentam “resistência e reação à manutenção de uma matriz cultural e epistêmica” que questionam a colonialidade surgiram de um contexto político onde as lutas dos movimentos sociais emancipatórios foram protagonistas, estando relacionados em sua grande maioria, às práticas de educação popular. Os autores decoloniais clássicos aqui mencionados, que escreviam muitas vezes no exílio num contexto de ditaduras latino-americanas, inauguram assim uma necessidade escancarada pelas demandas dos movimentos sociais de responder teoricamente às reivindicações que estão colocadas na luta dos povos historicamente subalternizados

Então, ao pontuarmos o que é hoje o giro decolonial, devemos saber que as desigualdades que já estavam sendo denunciadas não só teoricamente, mas fundamentalmente se encontram com as lutas dos movimentos sociais emancipatórios que emergem no subcontinente a partir da terceira onda democrática em meados da década de 1980, buscando recuperar uma aproximação entre sociedade e Estado. São lutas que emergem nas duas primeiras décadas do século XXI e que trouxeram à baila novas questões teóricas para se pensar a América Latina contemporânea, onde



governos e movimentos sociais formavam uma alternativa política às estruturas de poder.

Por uma pedagogia decolonial latino-americana: Movimentos emancipatórios como gestores de práticas de educação popular

Os autores do chamado Sul Global levantaram suas vozes para reconhecer a sua própria cientificidade e a necessidade de adaptar seus trabalhos à sua realidade específica. Essa necessidade é descrita em trabalhos sob a forma de novas epistemologias subversivas, por questionarem o padrão hegemônico de poder/saber encontram terreno fértil em práticas pedagógicas emancipatórias, em legado direto com a luta por reconhecimento cultural dos movimentos emancipatórios. Uma nova pedagogia decolonial caracteriza por complementar-se tanto de concepções pedagógicas e humanizadoras como a de Paulo Freire e Orlando Fals Borda, como por crítica necessária ao legado histórico da colonização e do modelo de desenvolvimento do capital na região, o qual acentuou as desigualdades sociais e o antagonismo de classe. Como indicado por Boaventura de Sousa Santos (2007), em sua discussão sobre a ecologia dos saberes, se faz necessário romper o abismo entre o lado visível e invisível do mundo, rompendo com a herança colonizadora e a matriz epistêmica racionalista e legalista das narrativas oficiais que promovem o silenciamento e exclusão de grupos historicamente subalternizados. Freire e Borda contribuem com o debate indicando a necessidade de, por meio da produção coletiva dos conhecimentos e da apropriação de práticas de educação popular, encontramos potenciais emancipatórios. Paulo Freire (1977) aciona o protagonismo das pessoas que se educam, partindo de suas realidades coletivas de existência, enquanto Orlando Borda (2009) destaca, em seu trabalho de pesquisa-ação, um esforço de compreensão histórica e social dos grupos mais expostos aos impactos da expansão capitalista na Colômbia – seu país de origem –, como os trabalhadores, os camponeses e os indígenas, ponto de partida coincidente em várias realidades de formação econômico-social latino-americana. Importante destacar que tanto para os autores mais conhecidos no campo da pedagogia, quanto para os autores clássicos e contemporâneos que reivindicam o giro decolonial, aparece como destaque a necessidade de se compartilhar novas metodologias e epistemologias, em um movimento dialético com a realidade concreta e com as lutas de movimentos sociais. Esse também é o objetivo desta pesquisa em andamento, indicar a necessidade de uma renovação do pensamento crítico por novas epistemologias do sul e pelo rechaço à naturalização da desigualdade social. Sobre o tema, Walsh enfatiza que o processo de libertação a ser realizado com a contribuição



das pedagogias decoloniais não trata somente de reconhecer as identidades culturais, como se a colonialidade pudesse ser superada apenas no campo cultural, indicando que a necessidade primeira “(...) é atacar as condições ontológicas-existenciais e de classificação racial e de gênero; incidir e intervir em, interromper, transgredir, desencaixar e transformá-las de maneira que superem ou desfaçam as categorias identitárias (...)” (Walsh, 2013, p. 55). Por isso, somente as lutas dos movimentos sociais por uma emancipação social podem contribuir decisivamente em práticas sociais, que são também políticas e que configuram uma categoria de análise tão importante contemporaneamente em nossa realidade que é a Educação do Campo, conforme aponta Miguel Arroyo, “e que tem como sujeitos, protagonistas os movimentos sociais camponeses”, e que como toda práxis social transformadora ainda se encontra em processo de construção histórica (Arroyo, 2015, p. 49). É nessa direção que pretendemos intervir, no processo de consolidação da Educação do Popular “como projeto histórico e político de conhecimento é resultado de uma reforma intelectual e moral no sentido atribuído por Gramsci” (Barbosa e Rosset, 2017, p. 39). O marxista italiano, que contribui decisivamente com o papel do intelectual na construção/manutenção da hegemonia, desenvolve suas reflexões justamente a partir de sua realidade concretas, dando relevo também à conquista de consciência do próprio papel histórico, utilizando a educação das massas como ferramenta de um projeto político que culminaria na construção de uma nova hegemonia subalterna (Aguar, 2017).

Conclusões prévias

Como reflexões finais, podemos indicar que os elementos teóricos recuperados neste trabalho nos servem de terreno fértil para construir um arcabouço epistemológico capaz de dar sustentação a uma teoria da educação que tenha condições de fomentar uma prática pedagógica libertadora.

O objetivo geral trata de discutir e aprofundar o debate sobre o processo de construção da exclusão de grupos historicamente subalternizados, indicando também como uma educação popular e decolonial pode questionar a hegemonia do pensamento ocidental com outros modos de saber próprios que valorizem as culturas e representações regionais. Com a contribuição do argumento decolonial, a teoria social deixa de ser autoreferida e se torna capaz de responder teoricamente às reivindicações que estão colocadas na luta dos movimentos sociais populares. A educação popular, emancipatória, se forma no movimento da sociedade e suas ideias nascem como uma



das expressões da emergência política das classes populares e, ao mesmo tempo, conduzem a uma reflexão e a uma prática dirigida sobre o movimento popular.

É sabido que Gramsci e Paulo Freire – para citar os mais relevantes teóricos da educação emancipatória – evidenciam a necessidade de se desenvolver uma consciência crítica e, conseqüentemente a autonomia dos grupos subalternos na disputa pela hegemonia na sociedade civil. Assim, entendemos que toda construção hegemônica consiste em um ato pedagógico, um projeto moral e político de uma classe no poder sobre as classes antagônicas e aliadas, destacando a base material que permite o exercício dessa hegemonia, contribuição ancorada especificamente no pensamento gramsciano. Paulo Freire, por sua vez, reconhece os movimentos sociais como as forças por excelência capazes de alterar situações de injustiça construídas na história. Os autores indicam que, para os grupos subalternos, fazia-se necessário compreender a relação intrínseca entre política e cultura, que permitia redefinir a noção de verdade. Coloca-se o desafio de construir a própria cultura como instrumento de emancipação política, construção que acontece no processo de organização e educação.

A pedagogia do oprimido é essencialmente uma pedagogia daquele outro que se encontra na margem. Boaventura de Sousa Santos afirma, ao defender a criação de uma Epistemologia do Sul, que das margens se vêem melhor as estruturas de poder. E ao analisar essas estruturas, sabendo da sua existência poderemos confrontá-las.

Notas

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN – Brasil.
jdanillaaguiar@hotmail.com

Referências

- Aguiar, Danilla. (2012) *Análise das interpretações do governo Evo Morales: legado histórico e o poder nacional-indígena*. (Dissertação de mestrado). Natal: PPGCS/UFRN.
- Aguiar, Danilla. (2017) *Entre a subalternidade e o socialismo indo-americano: existe um pensamento marxista decolonial?* (Tese de doutorado). Campina Grande: PPGCS/UFCG.
- Arroyo, Miguel. (2015) Os Movimentos Sociais e a construção de outros currículos. *Educar em Revista*, Curitiba, Brasil, n. 55, p. 47-68, jan./mar. Editora UFPR.
- Ballestrin, Luciana. (2012) *O Giro Decolonial e a América Latina*. 36º Encontro Anual da Anpocs: Águas de Lindóia, 2012. Disponível em: <https://bit.ly/3nhIVRK>. Acesso em maio de 2019.



Barbosa, Lia; Rosset, Peter. (2017). Movimentos Sociais e Educação do Campo na América Latina: Aprendizagens De Um Percurso Histórico. *Revista Práxis Educacional*, Vitória da Conquista, v. 13, n. 26, p. 22-48, set./dez.

Dussel, Enrique. (1977) *Filosofía da Libertación na América Latina*. São Paulo: Loyola/UNIMEP. Disponível em: <https://bit.ly/3rR77gx>. Acesso em julho de 2019.

Freire, Paulo. (1977) *Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Gramsci, Antonio. (2002) *Cadernos do Cárcere*. O Risorgimento. Notas sobre a história da Itália. Vol. 5. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Lander, Edgardo (org.) (2005) *A colonialidade do saber*. Eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. São Paulo: CLACSO.

Löwy, Michael. (2015) Entrevista a Michael Löwy. *Analéctica*. Revista Eletrônica de pensamento crítico. Ano I, N° 9 Agosto 2015. Disponível em: <https://bit.ly/3rWicgk>. Acesso em 10 de out. de 2015.

Mignolo, Walter. (2010) *Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Argentina: Ediciones del signo.

Mota Neto, João Colares. (2018) Paulo Freire e Orlando Fals Borda na genealogia da pedagogia decolonial latino-americana. *Folios*, 48, 3-13.

Quijano, Aníbal. (1992) Colonialidad y Modernidad-Racionalidade. In: BONILLA, Heraclio. *Los Conquistados: 1492 y la población indígena de las Américas*. Bogotá: Tercer Mundo.

Quijano, Aníbal. (2005) Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais*. LANDER, Edgardo (org). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO.

Santos, Boaventura de Sousa. (2007) *Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a uma ecologia de saberes*. Revista Crítica de Ciências Sociais, 78, Outubro.

Streck, Danilo Romeo; Adams, Telmo. (2012) Pesquisa em educação: os movimentos sociais e a reconstrução epistemológica num contexto de colonialidade. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 243-257.

Walsh, Catherine. (2013) Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos. In: C. Walsh (ed.), *Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir*. Quito: Ediciones Abya-Yala.



Mapeamento da produção acadêmica sobre movimentos sociais no Brasil: Teses e dissertações defendidas entre 2013 e 2018.

Caio Becsi Valiengo¹

Resumo

Este artigo realiza um mapeamento da produção acadêmica brasileira do campo de movimentos sociais entre os anos de 2013 e 2018. Para isso, são analisadas teses e dissertações defendidas neste período, com objetivo de compreender se houve um aumento destes estudos nos últimos anos, e se sim, a partir de quais referenciais teóricos e epistemológicos isto ocorreu.

A amostra da análise é composta por 241 teses e 627 dissertações, indexadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, cujos objetos de estudo são movimentos sociais. Trata-se de uma robusta produção de âmbito nacional de universidades públicas e privadas localizadas no Sudeste (44%), Nordeste (26%), Sul (21%), Centro-oeste (4%) e Norte (5%). Embora exista uma concentração das pesquisas no Sudeste, os dados revelam que pesquisadores de todo o país estão interessados em refletir sobre ação coletiva contemporânea.

A multiplicidade de sujeitos políticos contemporâneos, com suas especificidades no campo da ação coletiva, tem demandado de pesquisadores novos olhares e chaves interpretativas para o entendimento destes fenômenos. Por isso, este artigo busca verificar, por meio da análise de resumos dos trabalhos, (1) quais sujeitos políticos são analisados, (2) quais metodologias são utilizadas, e, principalmente, (3) quais repertórios teóricos e epistemológicos são mobilizados pelos pesquisadores brasileiros para refletir sobre e compreender estes fenômenos.

É manifesto que os estudos recentes são marcados por um hibridismo conceitual onde nem sempre é evidente delimitar escolas de pensamento. No entanto, este artigo busca contribuir analisando quais correntes teóricas, ou seus sincretismos, têm prevalecido nas pesquisas do período estudado.

Palavras chave

Movimentos sociais; Produção acadêmica; Teses e dissertações; Epistemologias; Sociologia da Ciência.



Introdução

Este artigo² pretende realizar um mapeamento da produção acadêmica do campo de movimentos sociais entre os anos de 2013 e 2018 no Brasil. Para isso, são analisadas teses e dissertações defendidas neste período, com objetivo de compreender se houve um aumento dos estudos sobre movimentos sociais nos últimos anos no país e a partir de quais referenciais teóricos e metodológicos isto ocorreu. A amostra da análise é composta por 868 trabalhos (241 teses e 627 dissertações), indexadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)³.

A multiplicidade de sujeitos políticos contemporâneos, com suas especificidades no campo da ação coletiva, tem demandado de pesquisadores novos olhares e chaves interpretativas para o entendimento destes fenômenos. Por isso, este artigo busca verificar, por meio da análise de resumos dos trabalhos, (1) quais sujeitos políticos são analisados, (2) quais metodologias são utilizadas, e (3) quais repertórios teóricos são mobilizados pelos pesquisadores brasileiros para refletir sobre e compreender estes fenômenos e se estão inseridos no campo das teorias dos movimentos sociais.

Movimento social: categoria em disputa

A categoria “movimento social” é controversa, polifônica, e carregada de disputas políticas e conceituais. Criada por volta de 1840 para analisar os movimentos operários europeus (Scherer-Warren, 1987:12), o conceito de “movimentos sociais” foi originalmente trabalhado para diferenciar as movimentações “racionais”, inicialmente das classes trabalhadoras e depois de diversos grupos que demandavam direitos, de movimentações “espontâneas”, como ações de protestos e motins⁴.

No entanto, é importante uma definição inicial do que se entende por “movimento social” neste artigo, uma vez foi a partir dela que diversas escolhas metodológicas foram feitas⁵. Para Della Porta e Diani (1999:20-21), os movimentos sociais possuem peculiaridades analíticas que justificam o desenvolvimento de um campo acadêmico próprio para seu estudo. Para os autores, os movimentos sociais são um processo social peculiar, que consiste nos mecanismos nos quais uma multiplicidade de atores se engaja na ação coletiva. Alguns pontos são fundamentais para diferenciá-los de outras formas de ação coletiva, como (a) seu envolvimento em relações conflituosas, políticas e/ou culturais, com oponentes facilmente identificáveis, para promover ou se opor a mudanças sociais; (b) são conectados por densas redes informais; (c) compartilham uma identidade coletiva própria.



Além disso, muitas vezes o termo “movimento social” é utilizado de forma indiscriminada tanto para se referir as redes que o caracterizam como também para as organizações e indivíduos que as compõem. Nenhum ator coletivo, independente de sua força e tamanho, pode representar um movimento social como um todo. Exemplificando, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é sem dúvida um dos maiores atores coletivos no Brasil, e certamente a maior organização dos movimentos sociais camponeses, porém, não podemos dizer que o MST representa o movimento camponês em sua plenitude.

Mais do que um jogo de palavras, estas distinções são importantes para caracterização dos objetos de estudo deste artigo. A análise aqui realizada das teses e dissertações do campo de movimentos sociais busca identificar tanto os movimentos sociais (rede) que estas pesquisam buscam estudar, como também quais organizações e indivíduos que os compõem – independente se esta diferenciação é realizada ou evidenciada ao longo dos trabalhos por seus autores.

Antes de mergulhar na produção acadêmica entre 2013 e 2018, é importante realizar um breve panorama histórico do campo de estudos de movimentos sociais no Brasil nas últimas décadas, para identificarmos possíveis continuidades, rupturas e tendências.

O campo de estudos sobre movimentos sociais no Brasil

Durante as décadas de 70 e 80, enquanto nos países centrais ainda refletiam sobre os desdobramentos das disputas conceituais entre as teorias do paradigma norte-americano (principalmente a partir da Teoria da Mobilização de Recursos) e a corrente europeia sobre os Novos Movimentos Sociais, o debate brasileiro buscava entender as características próprias de suas dinâmicas sociais nacionais e regionais (Bringel, 2011:56). Ainda que sofrendo uma forte influência das correntes europeias, especialmente a partir dos trabalhos de Alberto Melluci e Alain Touraine, as pesquisadoras e pesquisadores brasileiros se defrontavam com questões como o “basismo” (Scherer-Warren & Krischke, 1987) e dos “novos personagens que entram em cena” (Sader, 1988). Em meio ao cenário de redemocratização, trabalhos publicados posteriormente, mas que analisavam o período, buscavam encontrar a existência de uma nova cultura política onde as classes populares finalmente teriam “a vez e a voz” (Doimo, 1995).

Na década de 90, com o avanço do neoliberalismo na região e a implementação da reforma do aparato estatal, o debate acadêmico sobre ação coletiva passa a olhar com mais atenção para uma nova sociedade civil organizada, por meio da figura das



Organizações Não Governamentais (ONGs) e do Terceiro Setor. Para Lavallo, Castello e Bichir (2004), os movimentos sociais registraram misterioso sumiço no debate acadêmico, “a despeito de esses atores terem ocupado posição privilegiada nas análises sociológicas da década anterior”.

Já nos anos 2000, quase toda América do Sul é marcada pelo ciclo de governos progressistas, que tiveram uma relação por vezes dialógica, por outras conflituosas, com os movimentos sociais. Abers e Von Bulow (2011:53) mostram como, por meio da ruptura com os grandes marcos teóricos adotados desde os anos 60, o campo de pesquisa sobre movimentos sociais busca “alcançar sínteses que promovam um maior diálogo entre a literatura de movimentos sociais e discussões mais gerais sobre ação coletiva”, buscando-se delimitações mais das fronteiras do objeto de estudo do próprio campo.

A tentativa de um diálogo maior entre os estudos de movimentos sociais e ação coletiva de forma mais ampla continuou nos anos 2010. Enquanto algumas apresentam como os questionamentos das fronteiras do campo de pesquisa, tanto empírica como teoricamente, levaram alguns a defender a substituição do conceito de “movimentos sociais” por “sociedade civil” ou “política do conflito” (Abers, Von Bulow, 2011:52). Bringel (2011:61) fala da construção de uma maior interação teórica marcada pelo sincretismo conceitual, onde a noção de uma “escola norte-americana” ou uma “escola europeia” mais ou menos delimitada deixa de ter tanto sentido. Esta visão é reforçada por aqueles que mostram que as agendas contemporâneas de pesquisa podem se valer de ganhos e acúmulos que nos permitem prescindir de polarizações teóricas (Szwako, Dowbor, Carlos, 2017).

Em diálogo e em conflito com o breve panorama aqui traçado, é importante lembrar da contribuição de projetos que visam construir novas epistemologias para o campo das ciências humanas e sociais que foram sendo desenvolvidas ao longo das últimas décadas, afetando diretamente o campo de pesquisa sobre movimentos sociais (Bringel, 2010, Florez-Florez, 2007). Buscando dar conta das profundas marcas do colonialismo e do imperialismo nas periferias do sistema internacional, os estudos pós-coloniais, decoloniais e as epistemologias do Sul se destacam.

Finalmente, como reforça Gohn (2014:331), o campo de estudo dos movimentos sociais não se trata apenas de um momento da produção sociológica, que pode se confundir com a própria existência concreta do fenômeno e suas



manifestações empíricas, mas sim fruto de um esforço permanente da tentativa da realização de uma história do presente.

Dissertações e teses: Justificativas de uma escolha

A escolha pela análise de dissertações e teses, em detrimento de outros tipos de publicações, não foi despropositada. A análise da produção de diferentes campos científicos varia de acordo com suas especificidades. Enquanto algumas áreas do conhecimento privilegiam produções publicadas em reduzido número de periódicos de “alto impacto”, outras voltam os seus olhares para produções realizadas no âmbito de eventos científicos ou mesmo a publicação de livros e coletâneas, como prevalece no campo das ciências humanas e sociais (Kobashi, Santos, 2006:29). No entanto, estas publicações costumam representar a produção científica hegemônica, de pesquisadoras e pesquisadores que foram capazes de se consolidar em seus campos e/ou tiveram as condições materiais de participar de eventos científicos. Assim, as produções hegemônicas tendem a ser restritas e não refletem a globalidade do campo.

Explorar as bases de dados de dissertações e teses produzidas no país significa rememorar a atividade científica desenvolvida na universidade, resgatando dispositivos de memória submersos nas complexas bases de dados oficiais, promovendo a reapropriação do conhecimento produzido (Kobashi, Santos, 2006:28). Especialmente para o campo dos movimentos sociais, é essencial o entendimento da existência de uma memória oficial hegemônica e uma memória coletiva daqueles pertencentes aos grupos subalternos. Portanto, analisar a produção científica que se debruça sobre as práticas e conhecimentos dos movimentos sociais também é contribuir para uma memória a partir dos oprimidos e seus saberes historicamente subalternizados (Scherer-Warren, 2010: 22).

Este trabalho busca, de forma exploratória, realizar um mapeamento da produção acadêmica de dissertações e teses do campo de movimentos sociais entre os anos de 2013 e 2018. Além da atualização histórica típica deste tipo de estudo, o recorte temporal deste artigo, com início em 2013, se dá justamente pelo retorno da centralidade dos movimentos sociais brasileiros no contexto político e seus impactos na sociedade. Se por um lado, os anos 2000 foram marcados pela

relação dos movimentos sociais com o Estado, especialmente a partir das experiências do Partido dos Trabalhadores (PT) no governo federal, o que demandou análises da relação destes sujeitos políticos com a institucionalidade, os anos 2010 se apresentam



como importante inflexão na história recente dos movimentos sociais e ciclos de protesto no mundo todo (Castells, 2013, Gohn, 2014).

No Brasil, esta inflexão foi marcada pela retomada das ruas (e a crescente importância das redes) em Junho de 2013, cujos entendimentos e significados ainda estão em disputa, mas que de maneira inquestionável, reacendeu o campo de estudos sobre movimentos sociais no país (Rolnik, 2013, Nobre, 2013). Além de Junho, uma série de marcos da história política nacional recente apresentaram “novíssimos personagens em cena” (Gohn, 2017), como os estudantes secundaristas que ocuparam as escolas (Campos, Medeiros, Ribeiro, 2016), os movimentos de protesto contra grandes eventos (Copa do Mundo de futebol em 2014 e Olimpíadas em 2016), os movimentos feministas e os movimentos de protesto contra e a favor do processo de impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff. Além destes grandes marcos, observamos o surgimento de novas formas de associativismo, especialmente a partir dos chamados “coletivos” (Valiengo, 2016).

Análise de dissertações e teses (2013-2018)

Neste artigo foram analisados dois importantes metadados: palavras-chave e resumos. Conforme a Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), em norma específica para o tema (NBR 6028), um resumo deve ser uma “apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento”. (ABNT, 2003). Resumos podem ser estruturados ou não estruturados: estruturados são aqueles que apresentam partes bem definidas, com um cabeçalho que nomeia cada uma das seções de um trabalho, como “objetivos”, “referencial teórico”, “método” e “conclusões”. Conforme Gonçalves (2008:5), em artigo que analisa a especificidade destes metadados na área das ciências sociais, este tipo de resumo é muito comum em periódicos da área médica, mas “pouco utilizados pelas ciências humanas e sociais, cujos resumos são normalmente apresentados como um parágrafo longo, sem distinção formal entre as partes do documento”.

Ainda conforme a mesma norma da ABNT, uma palavra-chave é uma “palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida, preferentemente, em vocabulário controlado” (ABNT, 2003). Portanto, a formulação adequada de resumos e palavras-chave auxilia nos processos de comunicação científica e é fundamental para indexação e recuperação informacional da produção do conhecimento.

Por mais que, como dito anteriormente, as bases de dados de teses e dissertações sejam minimamente estruturada no país, não existe qualquer padrão para o preenchimento de metadados e descritores essenciais para determinadas análises da



produção científica, como a produção de palavras-chave, resumos e referências bibliográficas. Mesmo que os manuais de pesquisa, e a própria ABNT, tragam recomendações para produção de palavras-chave e resumos, isso é pouquíssimo observado na prática. Portanto, é a partir desta realidade que este artigo se desenvolve.

A primeira base de dados analisada neste trabalho foi composta por 1.901 trabalhos, sendo 544 teses e 1.357 dissertações defendidas entre os anos 2000 e 2018, que utilizavam as palavras-chave “movimentos sociais”, “movimento social”, “ação coletiva” e termos correlatos que integram este campo de pesquisa⁶. Este levantamento preliminar evidenciou o crescimento de trabalhos defendidos em programas de pós-graduação em todo Brasil ao longo dos quase últimos 20 anos, como pode ser observado no gráfico 1:

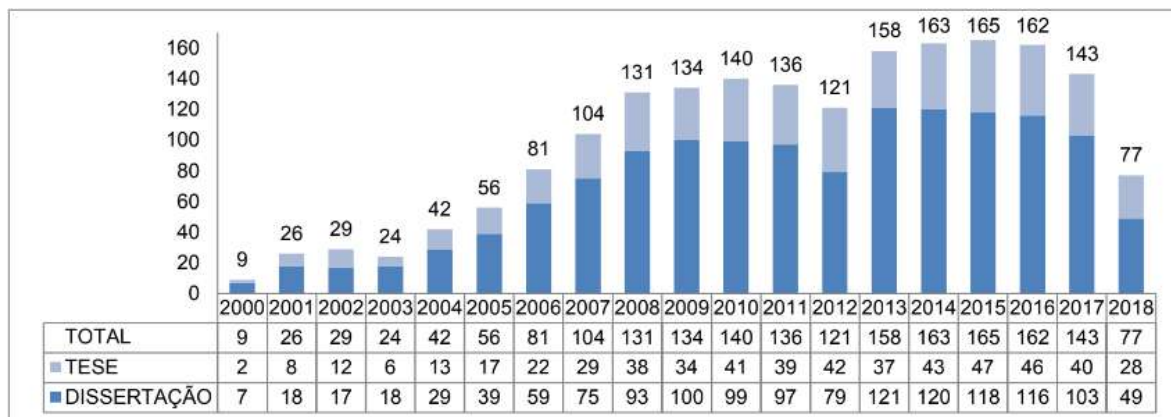


Gráfico 1. Produção de teses e dissertações (2013-2018)

Se entre 2000 e 2006 foram defendidos apenas 267 trabalhos, o quinquênio de 2007 a 2012 já contou com um aumento expressivo, com 766 trabalhos defendidos, representando um primeiro salto quantitativo da produção do campo no período. Outro momento de crescimento se dá entre 2013 e 2018⁷, quando foram defendidas 868 teses e dissertações, um aumento de quase 15% do quinquênio anterior (2007-2012) e mais de 300% de aumento se comparado com o período que antecede este.

Posteriormente, realizou-se a leitura e análise dos resumos⁸ dos 868 trabalhos defendidos entre os anos 2013 e 2018. Esta análise buscou identificar, a partir das categorias sinalizadas anteriormente: (1) quais movimentos sociais (rede) estas pesquisam buscam estudar, (2) quais organizações e indivíduos que os compõem (3) quais metodologias são utilizadas nos trabalhos, e, (4) quais repertórios teóricos são



mobilizados pelos pesquisadores brasileiros para refletir sobre e compreender estes fenômenos.

Em um primeiro refinamento da amostra, foram excluídos todos os trabalhos que não possuíam resumo (87) e que tratavam de outros temas que não os do campo dos movimentos sociais (241), como aqui entendido. Importante algumas breves considerações sobre o que foi e o que não foi considerado como parte do campo de estudos de movimentos sociais. Alguns casos são óbvios, como pesquisas do campo de direito onde os termos “ação coletiva” ou “protesto” ganham um significado próprio da terminologia jurídica, e nada dizem respeito aos movimentos sociais. Ou mesmo casos mais simples que refletem apenas uma má utilização de palavras-chave no processo de indexação, como quando os trabalhos integram outros campos do conhecimento, no entanto o pesquisador está inserido em um programa ou grupo de estudos que também estuda movimentos sociais.

Os casos menos óbvios foram aqueles que tratam de processos e/ou atores políticos integrantes da ação coletiva, como sindicatos, grupos de interesse ou outros tipos de associativismo, mas não necessariamente são movimentos sociais, ou seja, não possuem o conjunto de atributos aqui entendidos como fundamentais para um movimento social (relações conflituosas com oponentes facilmente identificáveis; conexão por densas redes informais; compartilhamento de uma identidade coletiva própria).

Com este refinamento, a análise que seguirá a partir deste ponto foi realizada a partir de um conjunto de 540 trabalhos. A distribuição geográfica dos estudos é a seguinte: 44% no Sudeste, 26% no Nordeste, 21% no Sul, 5% no Norte e 4% no Centro-oeste. Embora seja evidente a concentração das pesquisas no Sudeste, com destaque para São Paulo, os dados revelam que pesquisadores de todo o país estão interessados em refletir sobre ação coletiva contemporânea.

Os movimentos sociais (rede) tratados nos trabalhos são dos mais variados. Apenas em 2% dos trabalhos não foi possível identificar no resumo qual movimento buscou-se pesquisar, e em 3% dos trabalhos de fato não existia um movimento específico a ser estudado por conta da natureza das pesquisas. Os 95% restantes das teses e dissertações analisaram 47 categorias⁹ diferentes de movimentos sociais, como mostra a tabela 1:



Campeño (99)	Ciclos de protesto (50) ¹⁰	Moradia (41)
Ciberativismo (30) ¹¹	Movimento negro (23)	Associação de moradores (20)
Feminismo (19) ¹²	LGBT (16)	Cultura (13)
Índigena (13)	Campeño + Feminismo (12)	Comunicação (12)
Educação (11)	Mobilidade urbana (10)	Ambiental (9)
Pessoas com deficiência (8)	Movimento de consumidores (7)	Movimento estudantil (7)
Movimento de atingidos (6) ¹³	Movimento de trabalhadores (6)	Movimento hip hop (6)
Ciclos de protesto + Ciberativismo (5)	Movimentos sociais urbanos (5)	Altermundismo (4)
Feminismo + LGBT (4)	Juventude (4)	Movimento sanitária (4)
Campeño + Índigena (3)	Direitos Humanos (3)	Movimento de fábricas recuperadas (3)
Direito à cidade (3)	Moradia + Feminismo (3)	Movimento de prostitutas (3)
Direito dos animais (3)	Política de drogas (3)	Movimento negro + Feminismo (3)
Ambiental + Ciberativismo (2)	Democratização (2)	Humanização do parto (2)
Anarquistas (2)	Economia Solidária (2)	LGBT + Ciberativismo (2)
Ciclos de protesto + Mobilidade urbana (2)	Feminismo + Ciberativismo (2)	Movimento anticorrupção (2)
Movimento negro + Ciberativismo (2)	Movimento punk (2)	Saúde (2)
População de rua (2)	Outros (8)	

Tabela 1. Categorias de movimentos sociais por quantidade de trabalhos

Apenas 35 trabalhos analisam dois ou mais movimentos sociais e suas articulações e interseccionalidades. Como pode ser observado, os movimentos sociais mais estudados no período são, respectivamente: campeño (99 trabalhos), ciclos de protesto (50 trabalhos), Ciberativismo (30 trabalhos), movimento negro (23 trabalhos), feminismo e mulheres (19 trabalhos) e LGBT (16 trabalhos). Essa distribuição de grandeza se reproduz quando segmentamos esta amostra regionalmente, como na tabela 2:

Centro-oeste	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul
Campeño (5)	Campeño (10)	Campeño (30)	Campeño (46)	Campeño (23)
Ciclos de protesto (3)	Moradia (3)	Ciberativismo (11)	Ciclos de protesto (29)	Feminismo (15)
Ciberativismo (3)	Feminismo (2)	Moradia (11)	Moradia (26)	Ciclos de protesto (15)
Mobilidade urbana (3)	Índigena (2)	Movimento negro (10)	Ciberativismo (19)	Ciberativismo (10)
Feminismo (2)	Ambiental (2)	Ciclos de protesto (9)	Feminismo (15)	Movimento negro (7)
Movimento negro (2)		Feminismo (9)		
		Associação de moradores (9)		

Tabela 2. Categorias mais estudadas por região

Interessante notar a predominância dos estudos sobre os movimentos sociais do campo que lutam pela terra em todas as regiões do país, uma temática histórica deste campo de estudos, que ainda se mantém relevante. As temáticas sobre o ciclo mundial recente de protestos e sobre a utilização das tecnologias da informação e comunicação e de redes sociais (ciberativismo) refletem características específicas do período histórico analisado e apontam para caminhos interessantes no campo dos movimentos sociais. As pautas feministas, LGBT e do movimento negro, identificado por muitos autores como reflexos dos Novos Movimentos Sociais, ainda aparecem como muito relevantes na produção científica. Outro tema que se destaca, especialmente no sudeste e



nordeste, é dos movimentos sociais de moradia, especialmente das ocupações, que representa os desafios complexos das grandes cidades e centros urbanos.

Outro esforço realizado foi, quando possível, identificar nos resumos quais grupos específicos foram analisados nas pesquisas. Desta forma, foram identificados 73 grupos como representantes ou integrantes dos movimentos sociais acima apontados. A tabela 3 traz suas denominações e quantidade de vezes daqueles que foram citados pelo menos duas vezes:

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) (53)	Movimento Passe Livre (10)	Mídia Ninja (7)
Quilombola (7)	Movimento de Mulheres Camponesas (6)	Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) (6)
Via campesina (6)	Movimento Brasil Livre (MBL) (5)	Bloco de Lutas pelo Transporte Público (4)
Levante Popular da Juventude (4)	15M (3)	Clube de mães (3)
Movimento Xingu Vivo para Sempre (3)	Anonymous Brasil (3)	Marcha Mundial das Mulheres (3)
Occupy Wall Street (3)	Atingidos por barragens (3)	Movimento Nacional da População em Situação de Rua (2)
Atingidos pela mineração (2)	Fora do Eixo (2)	Rede de Educação Cidadã (2)
Black Bloc (2)	Marcha da Maconha (2)	União dos Movimentos de Moradia de São Paulo (2)
Comunidades Eclesiais de Base (2)	Marcha das Vadias (2)	União dos Trabalhadores Favelados (2)
Cursinhos populares (2)	Movimento de combate à corrupção eleitoral (2)	Vem pra rua (2)
Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) (2)	Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu (2)	Outros (37) ¹⁴

Tabela 3. Grupos de movimentos sociais por quantidade

Como esperado, os grupos estudados mais citados possuem correlação direta com os movimentos sociais mais estudados descritos anteriormente.

Seguindo uma tendência histórica do campo de estudos de movimentos sociais na realização de estudos de natureza empírico-descritiva (Gohn, 2014:10), a grande maioria dos trabalhos (88%) é fruto de pesquisa empírica, por meio de estudos de casos. Apenas 2% realizam reflexões mais teóricas, sem necessariamente se apoiar em algum caso, e outros 2% realizam estudos de outra natureza (como estudos bibliométricos). Nos 8% restantes dos trabalhos, não foi possível identificar o tipo de estudo realizado apenas pela leitura do resumo.

Método	Qtde.	%
Entrevista	143	30%
Análise documental	74	16%
Etnografia	48	10%
Análise histórica	30	6%
Análise de mídia	22	5%
Análise de redes sociais	21	4%



Análise do discurso	18	4%
História oral	18	4%
Survey	15	3%
Outros	17	4%
Método não informado ¹⁹	70	15%

Tabela 4 . Métodos de pesquisa mais utilizados

Para facilitar a análise, foram agrupados métodos similares, que obviamente reservam suas peculiaridades, mas podem ser considerados parte de uma mesma categoria¹⁶. Fica evidente a predominância de métodos qualitativos nas dissertações e teses do campo de movimentos sociais. Além disso, quase 70% dos trabalhos do tipo estudo de caso utilizam dois ou mais métodos para coleta e tratamento de dados.

O objetivo inicial deste artigo era também ser capaz de identificar quais correntes teóricas do campo dos movimentos sociais são mobilizados pelas pesquisadoras e pesquisadores brasileiros. Deve-se levar em conta também que este é um campo nomeadamente interdisciplinar, no qual diferentes áreas do conhecimento, e seus referenciais teóricos, são articulados para um melhor entendimento deste fenômeno de ação coletiva, ou seja, se por um lado, estas produções se inserem no campo de estudos de movimentos sociais por ter estas redes e sujeitos políticos como objeto de suas pesquisas, elas não necessariamente utilizam os conceitos e categorias das teorias dos movimentos sociais.

No entanto, se a identificação das escolhas metodológicas nos trabalhos por meio da leitura de resumos já foi desafiadora, esta questão se complexifica ainda mais quando tentamos identificar com quais referenciais teóricos as dissertações e teses da amostra dialogam. Levando em consideração a tipologia de resumos tratada anteriormente, podemos afirmar que a grande maioria dos trabalhos analisados produziram resumos do tipo indicativo, ou seja, aquele que traz apenas os pontos principais de um documento e não dispensa a consulta ao trabalho completo. Mesmo aqueles que apresentavam características de um resumo informativo, ou seja, que apresenta para o leitor as finalidades, metodologias, resultados e conclusões de um trabalho, ainda assim o faziam de maneira parcial, evidenciando apenas alguns destes aspectos. Foram raros os resumos que traziam estas informações em sua plenitude.

Essa fragilidade é flagrante em um primeiro achado: em 46% do total de trabalhos analisados não é possível identificar seus referenciais teóricos. Muitos resumos apresentam caráter excessivamente descritivo, não evidenciando com qual campo teórico a pesquisadora ou pesquisador está dialogando.



Os outros 54% representam referenciais teóricos heterogêneos, múltiplos, de diversos campos do conhecimento. Para tratamento deste recorte onde foi possível, de alguma forma, identificar correntes teóricas mobilizadas, objetivou-se especificamente identificar aqueles que dialogavam com as teorias que integram o campo dos movimentos sociais. Para isso, utilizaram-se três critérios: (a) a utilização de uma terminologia e um sistema conceitual típico do campo dos movimentos sociais, por meio da identificação de conceitos-referência como “repertório”, “identidade”, “práticas”, dentre diversas outras; (b) citação direta de correntes teóricas; e (c) citação direta de determinados autores.

Com isso, identificou-se que 38% dos trabalhos (210) podem dialogar com os marcos teóricos do campo de movimentos sociais. Destes, apenas 39 referenciam diretamente alguma teoria do campo (como teoria da mobilização de recursos, teoria dos Novos Movimentos Sociais ou teoria marxista) e 15 referenciam diretamente um ou mais autores.

Se por um lado o nível de generalidade destes resultados chega a ser frustrante, uma coisa fica evidente: a necessidade da construção de melhores resumos e metadados que possibilitem a utilização de técnicas bibliométricas e cientométricas mais avançadas¹⁷, que por sua vez, permitam uma melhor compreensão dos campos teóricos mobilizados na análise dos movimentos sociais contemporâneos.

Considerações finais

Este artigo buscou, de maneira exploratória, fazer um primeiro mapeamento da produção acadêmica do campo de movimentos sociais, institucionalizada em teses e dissertações, dos últimos cinco anos.

Os achados deste artigo, mesmo que iniciais, apresentam uma primeira tentativa de análise da produção científica em larga escala sobre o campo dos movimentos sociais. O que é certo é que os desafios metodológicos encontrados são representativos deste tipo de empreitada, especialmente na área das ciências humanas e sociais.

Notas

¹ doutorando do Programa de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC (UFABC).

² Uma versão ampliada deste artigo foi apresentada no Grupo de Trabalho sobre Movimentos Sociais Contemporâneos durante o 19º Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado entre os dias 9 e 12 de julho de 2019 em Florianópolis, Brasil.



³ A escolha pela base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) se deu por ela utilizar o Padrão Brasileiro de Metadados para Descrição de Teses e Dissertações (MTD-BR), desenvolvido a partir de padrões internacionais para a descrição dessa tipologia documental, como o Electronic Thesis and Dissertations Metadata Standard (ETD-MS). Atualmente, a BDTD utiliza a terceira versão do Padrão, o MTD3-BR. Estas considerações técnicas são importantes pois ela garante a integridade e confiabilidade das bases de dados geradas e analisadas.

⁴ Não é objetivo deste trabalho realizar um panorama histórico do desenvolvimento destas teorias, uma vez que isso já foi feito de forma mais robusta e competente em trabalhos consagrados no campo de estudos dos movimentos sociais brasileiros (Alonso, 2009, Duriguetto, Montañó, 2011; Gohn, 2014; Gohn, 2014a).

⁵ Também não se pretende contrapor as diversas visões e uso do termo nas diferentes correntes teóricas que o analisam. A definição apresentada obviamente não é exaustiva e serve como ponto inicial o trabalho.

⁶ As palavras-chave já citadas representam mais de 90% da base analisada. Além destas, foram também buscados os termos “ativismo digital”, “ciberativismo”, “jornadas de junho”, “mobilização social” e “protesto” para tentar cobrir trabalhos que, por algum motivo, não foram identificados pelos seus autores nestes grandes termos.

⁷ O ano de 2018 está obviamente subrepresentado na amostra. Isso se dá pelo fato de que trabalhos defendidos neste ano ainda estão sendo indexados nas bases de dados pelos programas de pós-graduação. Este trabalho costuma ser feito de maneira manual e morosa. Existem programas que sequer possuem quadro administrativo próprio e dependem do trabalho voluntário dos próprios estudantes.

⁸ Importante frisar que a análise limitou-se às informações fornecidas nos resumos por seus autores, o que muitas vezes impossibilitou a identificação de um ou muitos dos aspectos que são objeto de estudo deste artigo.

⁹ Como em outros casos neste trabalho, respeitou-se as escolhas das pesquisadoras e pesquisadores em relação a denominação dos movimentos sociais que propunham estudar. Para fins de análise, foram realizados agrupamentos que reuniam, por exemplo, “movimentos sociais do meio ambiente” com “movimentos ambientalistas”.



¹⁰ Estudos que buscaram analisar as complexidades dos protestos e manifestações, especialmente as iniciadas nos anos 2011. Estes trabalhos não buscavam estudar um movimento social específico.

¹¹ Trabalhos que analisam grupos ciberativistas, como também o papel das tecnologias da informação e comunicação, especialmente das redes sociais, nos processos de protesto e organização política.

¹² Trabalhos que analisam os movimentos feministas propriamente ditos, como também aqueles que buscam compreender o papel das mulheres em outros movimentos sociais.

¹³ Aqui foram considerados os trabalhos que analisam os movimentos de pessoas atingidas pela mineração, barragens, etc.

¹⁴ Aqui foram agrupados todos grupos que foram citados apenas uma vez. A junção nesta categoria serviu o propósito de permitir uma melhor visualização dos dados.

¹⁵ Apesar de anunciarem em seus resumos que realizam estudos de caso, estes trabalhos não fornecem mais nenhum tipo de informação acerca de quais métodos foram utilizados ao longo da pesquisa.

¹⁶ Além do agrupamento, respeitaram-se as terminologias utilizadas pelos próprios trabalhos. É evidente que dependendo do referencial epistemológico e teórico mobilizados, “análise do discurso”, por exemplo, pode possuir significados muito distintos. No entanto, como já evidenciado ao longo de todo o artigo, nos ativemos ao que estava descrito nos resumos.

¹⁷ Neste tipo de estudo, tem-se tornado cada vez mais comum a utilização da metodologia da análise de redes por meio do uso de softwares para criação de redes de citações, de coautoria, co-citação, acoplamento bibliográfico e co-ocorrência de palavras-chave. Para tais tarefas, a padronização e estruturação de bases de dados é ainda mais necessária. Por mais que se recomende a utilização dos padrões da ABNT para produção de referências bibliográficas, por exemplo, ainda existe um nível grande de discricionariedade por parte das pesquisadoras e pesquisadores. Soma-se a isso o desafio técnico de se trabalhar com arquivos fechados, uma vez que as teses e dissertações costumam ser disponibilizadas em formato PDF ou similar, dificultando ainda mais a criação de bases de dados a partir das pesquisas.



Referências bibliográficas

Abers, Rebeca; Von Bulow, Marisa. Movimentos sociais na teoria e na prática: como estudar o ativismo através da fronteira entre Estado e sociedade. *Sociologias*, n; 28, p. 52-84, Porto Alegre, 2011.

Alonso, Angela. As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. *Lua Nova*, n.76, pp. 49-86, São Paulo, 2009.

Associação Brasileira De Normas Técnicas. NBR 6028. Informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro: 2003a.

Bringel, Breno. Ativismo transnacional, o estudo dos movimentos sociais e as novas geografias pós-coloniais. *Rev. do Progr. de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE*, v. 16, n. 2, p. 185 - 215, Recife, 2010.

Bringel, Breno. A busca de uma nova agenda de pesquisa sobre os movimentos sociais e o confronto político: diálogos com Sidney Tarrow. *Política & Sociedade*, vol. 10, nº 18, pp. 51-73, 2011.

Campos, Antonia; Medeiros, Jonas; Ribeiro, Marcio. *Escolas de luta*. São Paulo: Veneta, 2016.

Cardoso, Ruth. Os movimentos sociais na América Latina. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, São Paulo, 3(1), 1987.

Castells, Manuel. *Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da Internet*. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

Colégio Brasileiro De Altos Estudos (UFRJ). *Produção bibliográfica sobre movimentos sociais no Brasil: resultado final do levantamento*. Rio de Janeiro: 2014.

Della Porta, Donatella; DIANI, Mario. *Social movements: An introduction*. 2nd Ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2006.

Doimo, Ana Maria. *A vez e a voz do popular: movimentos sociais e participação política no Brasil pós-70*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995.

Duriguetto, Maria Lúcia; Montañó, Carlos. *Estado, classe e movimento social*. São Paulo: Cortez, 2011.

Florez-Florez, Juliana. *Lectura no eurocéntrica de los movimientos sociales latinoamericanos. Las claves analíticas del proyecto modernid/colonialidad*. In Castro-



Gomez, Santiago, Grosfoquel, Ramon., El Giro Decolonial, reflexiones para una diversidad epistemica más allá del capitalismo global. Bogot, siglo del Hombre Editores, p. 243 – 266, 2007.

Gohn, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Edições Loyola, 2014.

Gohn, Maria da Glória. Novas teorias dos movimentos sociais. São Paulo: Edições Loyola, 2014a.

Gohn, Maria da Glória. Manifestações e protestos no Brasil: correntes e contracorrentes na atualidade. São Paulo: Cortez. 2017.

Gonçalves, Ana Lima. Uso de resumos e palavras-chave em Ciências Sociais: uma avaliação. Enc. Bibli. R. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf., n. 26, Florianópolis, 2008.

Kauchakje, Samira. Movimentos sociais na academia: um olhar sobre as teses e dissertações produzidas na Unicamp e USP entre 1970-1995. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, 1997.

Kauchakje, Samira. 35 anos de pesquisa sobre movimentos sociais: permanências e diversidades nas teses e dissertações realizadas na USP e na Unicamp. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n.82, 2017, p.113-132, São Paulo, 2017.

Kobashi, Nair; Santos, Raimundo. Institucionalização da pesquisa científica no Brasil: cartografia temática e de redes sociais por meio de técnicas bibliométricas. TransInformação, 18(1), p. 27-36, Campinas, 2006.

Lavalle, Adrian Gurza; Castello, Graziela; Bichir, Renata. Quando novos atores saem de cena. Continuidades e mudanças na centralidade dos movimentos sociais Política & Sociedade, nº 5, pp. 37-55, 2004.

Misoczky, Maria Ceci Araújo; Flores, Rafael Kruter; Silva, Sueli Maria Goulart. Estudos organizacionais e movimentos sociais: o que sabemos? Para onde vamos? Cadernos Ebape.br, v. 6, p. 1-14, 2008.

Nobre, Marcos. Choque de democracia: razões da revolta. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.



Rolnik, Raquel. As vozes das ruas: as revoltas de junho e suas interpretações. *In* Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Carta Maior, Boitempo, p.7-12, 2013.

Sader, Eder. Quando novos personagens entram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo (1970-80). São Paulo: Paz e Terra, 1988.

Scherer-Warren, Ilse. Movimentos sociais. Florianópolis, Ed. Da UFSC. 1987.

Scherer-Warren, Ilse. Movimentos sociais e pós-colonialismo na América Latina. Ciências Sociais Unisinos. Vol. 46, N.1, p. 18-27, São Leopoldo, 2010.

Scherer-Warren, Ilse; Krischke, Paulo J. Uma revolução no cotidiano.

São Paulo, Brasiliense, 1987.

Szwako, José, Dowbor, Monika, Carlos, Euzenia. Movimentos sociais, sociedade civil e participação. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais. n.82, p.5-12, São Paulo, 2017.

Valiengo, Caio Becsi. "Nois por nois": movimentos sociais de comunicação em São Paulo. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e Governo) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016.



¿Construir otra sociedad desde los movimientos?: Los movimientos sociales como *modo de existencia* de la lucha en la sociedad capitalista.

Manuel Garza Zepeda
Ever Sánchez Osorio

Resumen

La ponencia propone el análisis de las luchas sociales contemporáneas, en particular aquellas relacionadas con los “gobiernos progresistas”, que permita dar cuenta de la situación que ha dado lugar a las afirmaciones de un fin de ciclo progresista. Frente al arribo de gobiernos que dan marcha atrás a las políticas sociales de los últimos años, surge la cuestión de cómo entender ese resultado: ¿qué falló en el análisis de los movimientos? ¿Por qué no se pudo prever el riesgo del retroceso? ¿Se trata del inevitable fin de un ciclo o bien de defectos en la observación o en las acciones de los propios movimientos? Frente a ciertas afirmaciones de que el problema fue no haber percibido adecuadamente la acción de contramovimientos de arriba, desde la perspectiva del marxismo abierto proponemos considerar a los movimientos sociales como la “forma” que asume la lucha dentro de la relación de capital. Y, por tanto, como el modo de existencia que niega pero al mismo tiempo expresa tal lucha. Esto nos permite comprender sus limitaciones y entender que la relación de capital implica un antagonismo con dos polos en conflicto y en acción: uno de ellos para trascender a la relación misma y a la “forma” movimiento social como exteriorización de la lucha, mientras el otro procura el encauzamiento de ella en esa “forma”. Sostendremos, en conclusión, que en la “forma” movimiento se encuentran limitaciones pero al mismo tiempo tendencias hacia el desbordamiento que miran más allá de la sociedad organizada por el capital.

Palabras clave

Movimientos sociales; Anticapitalismo; Marxismo abierto; Forma; Capital

Introducción

En los últimos cuatro años se ha desarrollado una interesante discusión catapultada por la observación de que la situación sociopolítica en Latinoamérica, lejos de corresponder a las esperanzas y el optimismo alentados en los primeros años del siglo XXI, parece encontrarse en franco retroceso para las fuerzas emancipadoras. El triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del año 2015 en Argentina, el triunfo electoral de la oposición en el parlamento venezolano ese mismo año, la destitución en Brasil de



Dilma Roussef en mayo de 2016 y el encarcelamiento de Luiz Inacio “Lula” Da Silva en abril de 2018, así como la incertidumbre respecto a un nuevo mandato presidencial de Evo Morales en Bolivia constituyen los síntomas más evidentes de lo que los analistas consideran una clara ofensiva con importantes avances de la derecha en la región sudamericana.

Frente a tal cambio en la situación es inevitable formular preguntas del tipo: ¿qué pasó? ¿cómo se puede explicar esta deriva? ¿Por qué se frustraron las esperanzas abiertas con la llegada de gobiernos que, con mayor o menor grado de radicalismo, proclamaban el abandono de las políticas neoliberales? Los diferentes intentos por ofrecer respuestas han producido un debate en torno a lo que algunos han llamado el “fin del ciclo progresista” (Katz, 2017; Rauber, 2015), el cual se ha centrado particularmente en ofrecer interpretaciones acerca del carácter de los denominados “gobiernos progresistas” y las causas de su retroceso electoral.

Aunque el debate ha hecho evidentes importantes diferencias respecto a la forma de caracterizar a tales gobiernos y al modo de considerar la situación actual – sea como rotundo fracaso o bien como avance parcial -, en la gran mayoría de los diagnósticos se postulan errores en la conducción de los procesos de cambio como uno de los factores fundamentales que condujeron a la situación actual. El problema, en todos los casos, tiene que ver con la necesidad de explicar cómo es posible que, después de la llegada al gobierno de un partido o un movimiento cuyo triunfo se presenta como una ruptura en el orden neoliberal, después de unos años los procesos electorales muestren un giro electoral hacia la derecha.

Fundamentación del problema

El denominado “ciclo progresista” refiere a la llegada al poder, en varios países sudamericanos, de gobiernos surgidos de procesos electorales que tradujeron las aspiraciones de diversas movilizaciones populares. Puede decirse que da inicio en 1998 con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, seguido de la elección de gobiernos que proclamaban su adhesión a principios distintos al neoliberalismo en Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay. Raúl Zibechi (2015) incluye en este grupo a Chile y Paraguay aunque formula una importante distinción en el interior del mismo: de un lado estarían aquellos gobiernos que intentaron cambios con diversos alcances pero nunca apuntaron hacia una superación del capitalismo extractivista-financiero. En este primer grupo considera a los gobiernos de Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay,



Paraguay y Chile. En otro grupo coloca a los gobiernos de Venezuela y Bolivia, que abiertamente proclamaron su intención de trascender la realidad existente.

Como afirma el propio Zibechi (2015), hablar simplemente de progresismo es demasiado vago, pues implica referirse con una etiqueta a procesos muy diferentes. Los diferentes gobiernos surgieron en algunos casos de movilizaciones exclusivamente electorales, mientras en otros fueron resultado de poderosos movimientos sociales con amplias trayectorias de lucha. Ya en el gobierno adoptaron medidas que pretendían dejar atrás el Consenso de Washington y apelaban a la reducción de las terribles desigualdades sociales que caracterizan a la región latinoamericana en su conjunto. El mejoramiento de las condiciones de vida para las mayorías más empobrecidas, el incremento de las posibilidades de consumo y las reformas que apuntaban a una mayor inclusión y la democratización política fueron caracterizados como “ciclo progresista” (Katz, 2017; Codas, 2015; Modonesi, 2015; Mitchell, 2016, Schavelzon, 2017), “cambio de época” (Arkonada, 2015) o “posneoliberalismo” (Stefanoni, s/f). Las diferentes denominaciones propuestas no son un asunto menor pues apuntan precisamente a la imprecisión en los términos del debate. Pues, como señala Katz (2017) no queda claro si la idea de un abandono del neoliberalismo se refiere al carácter de los gobiernos o al patrón de acumulación. Lo que sí queda claro, en cambio, es que en ningún momento refirió a la búsqueda de una trascendencia de las relaciones sociales capitalistas: se admitió la inevitabilidad del capitalismo y las escasas referencias a programas socialistas se redujeron a una eventualidad en algún futuro siempre lejano (Katz, 2017).

La ambigüedad en los términos del debate ha permitido entonces defender tanto la idea de que los gobiernos progresistas significaron avances, como afirmar de manera absoluta que no hubo tales. El principal argumento de quienes sostienen que los gobiernos progresistas trajeron consigo avances se basa en la mejoría de los indicadores socioeconómicos. En particular, una reducción de la pobreza que fue resultado tanto del crecimiento de los mercados laborales hecho posible por el crecimiento económico asociado a la exportación de materias primas, como de las políticas sociales que incluyeron el aumento de los salarios mínimos (Codas, 2015; Zibechi, 2015). Sin embargo, previene Katz (2017, 110), el crecimiento económico, del consumo, y el mejoramiento de las condiciones de vida también han sido registrados en otros ciclos de “reactivación y valorización exportadora”, por lo cual no pueden ser atribuidos de manera exclusiva a políticas particulares de los gobiernos progresistas.



Por otra parte, quienes rechazan la existencia de avances debidos a los gobiernos progresistas apuntan al hecho de que la desigualdad social no desapareció ni hubo verdaderas reformas estructurales (Zibechi, 2015). En el ámbito económico no hubo la capacidad de generar una economía productiva (Katz, 2017), en cambio se observó una verdadera desindustrialización y un curso de re-primarización de las economías como resultado de la adopción de políticas extractivistas (Zibechi, 2015; Svampa 2014; Stefanoni, s/f). En lo político, aunque se reconocen ciertas reformas que se consideran “conquistas democráticas” (Katz, 2017), parece haber cierto consenso en torno a la deriva autoritaria de los gobiernos progresistas, y en términos generales un distanciamiento hacia los movimientos populares.

Respecto a esta última cuestión, la de la relación con los movimientos populares, frente al avance de la derecha en los procesos electorales se ha postulado como una absoluta necesidad la de retornar a la articulación de los diversos actores del campo popular. Prácticamente se considera que la única posibilidad de evitar el retroceso y avanzar en la profundización de lo ya logrado radica en apelar a la participación popular (Rauber, 2015; Katz, 2017).

Esta apelación a la participación popular resulta llamativa, pues en general es posible observar que en el análisis y la valoración del significado de los gobiernos progresistas, es decir, si acaso pueden considerarse o no como un avance, en ningún momento aparecieron los movimientos populares. Una vez que condujeron, así fuera de manera indirecta, a los triunfos electorales, desaparecieron del horizonte del análisis. Se da cuenta de las vacilaciones, los errores, los anquilosamientos burocráticos, la incapacidad para mirar más allá de proyectos neodesarrollistas de parte de los nuevos gobernantes, sus limitaciones nacionalistas al dar la espalda a posibilidades de integración regional, de articulación productiva; pero los sectores populares simplemente son ignorados.

Esos actores solamente vuelven a aparecer cuando el ímpetu de los gobiernos progresistas empieza a declinar. Y reaparecen no para dar cuenta de lo que ha ocurrido con los procesos progresistas sino como sus críticos, incomprensiblemente incapaces de valorar las mejoras que han obtenido en sus vidas e ingratamente partidarios electorales de la derecha, así como las víctimas de la represión gubernamental progresista. No comprenden que sus críticas solamente fortalecen a la derecha y son capturados por las estrategias electorales de ésta, así como engañados cruelmente por la propaganda mediática de los grandes consorcios informativos vinculados a las élites



económicas, por no hablar de las embajadas norteamericanas, que se habrían visto obligadas a jugar el principal papel opositor a los gobiernos ante la desorientación política de la derecha electoralmente derrotada (Arkonada, 2015).

Víctimas de la represión, manipulados por la propaganda, la acción de los sectores populares, incluso de los más fuertes movimientos de la región no constituye un factor a ser tomado en cuenta en el despliegue de los procesos encabezados por los gobiernos progresistas sino al principio y en su discutido declive: no más que masas electorales. Pues como decíamos más arriba, en el momento crítico se reconoce la necesidad de volver a articularlos. La única posibilidad no sólo de profundizar sino incluso de consolidar lo ganado pasaría necesariamente por una radicalización que permita superar las vacilaciones (Katz, 2017). Y esa radicalización implica necesariamente un nuevo acercamiento con los movimientos populares. Paradójicamente, afirma Arkonada (2015), las victorias electorales son la condición que permitiría impedir la reversibilidad de los procesos puestos en marcha por los gobiernos progresistas. Vale la pena señalar, sin embargo, que la presencia de las masas populares no sólo se considera necesaria para ganar elecciones. Puede decirse, en cambio, que quienes apuestan a renovar la presencia de los movimientos en el escenario político principal les atribuyen una capacidad de transformación social que no está necesariamente justificada (Dhanagare D. y J. John, 1988).

¿Es posible construir otro mundo desde los movimientos sociales?

En este punto llegamos precisamente a la cuestión central de la ponencia. Cuando los estudiosos de los procesos abiertos por los gobiernos progresistas proponen que la única salida posible al riesgo de la reversión en esos países es el retorno a la relación con los movimientos populares, parecen perder de vista que en el análisis del desarrollo de aquellos procesos, dichos movimientos no constituyeron factor alguno. Vuelven a aparecer en el horizonte del análisis solo en tanto recurso para recuperar la iniciativa política y los triunfos electorales, frente al avance de los partidos y fuerzas contrarias al progresismo. Pero es evidente que esta consideración no implica modificar el tipo de relación de los movimientos con los gobiernos. Es decir, no se afirma que el problema haya radicado en haber marginado a los movimientos del desarrollo de los procesos. Sin embargo, el hecho de que no se pueda atribuir responsabilidad alguna a los movimientos en los errores, las vacilaciones o como quiera llamarse a las decisiones de los gobiernos que llevaron a las derrotas electorales, permite seguir atribuyéndoles a aquellos capacidades transformadoras. Si los errores pueden imputarse a los



gobiernos, e incluso a personajes particulares, los movimientos parecen haber salido sin mácula. Por ello es posible apelar nuevamente a su salvadora presencia. Aunque sigue siendo evidente que no se hace un llamado a modificar el patrón de relaciones con los gobiernos sino a renovar las relaciones, que en el pasado reciente estuvieron caracterizados por la represión, no necesariamente por la incapacidad de asumir las críticas, sino por el imperativo de mantener los procesos bajo control gubernamental. Los movimientos sociales no apelan a gobernar, pero es claro que han depositado sus esperanzas en lograr algunas de sus aspiraciones por la vía de gobiernos impulsados por ellos.

La pregunta abierta, entonces, es si acaso es posible construir otro mundo desde los movimientos sociales, es decir, si el fracaso ha sido producido por la marginación a que fueron sometidos.

Las reflexiones que proponemos en la siguiente parte de la ponencia se alejan de los casos concretos y adoptan un carácter más general, de carácter teórico, relacionado con la conceptualización misma de los movimientos sociales. A este respecto podemos decir que los estudios sobre esta problemática en general apuntan a la necesidad de dar cuenta de manera adecuada de los rasgos que adoptan los movimientos. Una revisión de la literatura correspondiente nos permitiría advertir que los enfoques predominantes se empeñan en la búsqueda de explicaciones plausibles acerca de las expresiones empíricas de los movimientos. La “novedad” parece haberse convertido en la característica más sobresaliente de cada oleada de luchas que de cuando en cuando sacuden diversas regiones del mundo (Pleyers, 2018). Así, mientras en los años 60 del siglo pasado surgieron los “nuevos movimientos sociales”, para fines del mismo teníamos a los movimientos alterglobalización (simbolizados por las luchas en Seattle en torno a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en 1999), y al finalizar la primera década del siglo veintiuno a los movimientos por la justicia global (simbolizados a su vez por los movimientos Ocupa, la Primavera árabe y los “indignados”).

Cada una de esas oleadas traería consigo reflexiones orientadas a señalar las novedades que justificarían la necesidad de renovar los enfoques de análisis, o incluso llevarían al planteamiento de buscar nuevas denominaciones justificadas por la relevancia de las transformaciones observables en los fenómenos empíricos (Bayat, 2012; Dinerstein y Deneulin, 2012).

Pero en todos estos desarrollos la reflexión sobre las posibilidades emancipadoras de los movimientos sociales está en general ausente. El reconocimiento del fracaso de las



esperanzas transformación puestas en los movimientos tampoco ha llevado a considerar si acaso tales esperanzas no son injustificadas o cuando menos valdría la pena emprender una seria discusión al respecto. Los movimientos sociales salen siempre bien librados, aún de los fracasos. Así, por ejemplo, en un libro de reciente aparición Geoffrey Pleyers (2018) plantea expresamente la cuestión, preguntándose cómo fue posible que las esperanzas de cambio abiertas por los movimientos de la década de 2010 hayan sido frustradas:

Siete años después del inicio de una ola global de movimientos sociales a favor de la democracia, el panorama político y social está lejos de las esperanzas democráticas que movilizaron a millones de ciudadanos. No solo los movimientos progresistas no lograron derrocar a los poderes a los que se oponían, sino que estamos frente a un fortalecimiento de la represión, del autoritarismo y del conservadurismo.

La respuesta que ofrece el mismo autor, retornando a la definición de Alain Touraine según la cual los movimientos sociales producen a la sociedad, es que en las perspectivas de análisis se dejó de lado el hecho de que “no solo producen a la sociedad los movimientos progresistas. También lo hacen los movimientos conservadores” (Pleyers, 2018:101). Aunque este planteamiento no se refiere expresamente a la cuestión de los gobiernos progresistas, ciertamente se encuentra en la misma tónica de intentar una explicación relativa a la derrota de las esperanzas de transformación, en este caso democrática, de las sociedades en que se producen amplias movilizaciones sociales. Es decir, nos coloca ya directamente en el problema central de esta ponencia: las posibilidades de generar transformaciones de orden societal desde los movimientos sociales.

La perspectiva de Pleyers (2018) contiene una innovación respecto de la necesidad de considerar que, frente a los movimientos sociales que buscan la democratización, no hay un vacío sino fuerzas, que él propone considerar también como movimientos, cuyo objetivo es apuntalar el capitalismo financiero global, actores ciertamente conservadores que deben ser estudiados entre los movimientos sociales. Pero su planteamiento no se limita a esta cuestión, que sin duda deja de pie la consideración de los movimientos sociales como productores de la sociedad. Sólo enfatiza que la producción de la sociedad es el resultado de la acción no solamente de los movimientos progresistas sino más bien de la interacción entre estos y otros movimientos y actores conservadores.



Para nuestros propósitos aquí es más relevante otra condición que Pleyers (2018) establece para la adecuada comprensión de los impactos de los movimientos sociales sin abandonar la concepción toureniana de los movimientos sociales como agentes de la transformación social: el reconocimiento de los mecanismos de reproducción de la sociedad. Por ello llama a no subestimar “el peso de las estructuras sociales y de los procesos sociales que contribuyen a reproducir la sociedad, como por ejemplo los *habitus*, la apatía y el conformismo de muchos ciudadanos, el peso de las instituciones y de los actores conservadores, entre otros factores” (Pleyers, 2018: 97).

Esta consideración de factores que se oponen a la acción de los movimientos sociales y que permiten comprender los limitados impactos que se pueden observar en espacios institucionales nos conduce más allá de la imputación de errores a los dirigentes o activistas, de desviaciones debidas a la traición o la cooptación. Conduce la mirada hacia el exterior de los movimientos para entender que su acción no se desplaza suavemente sobre una superficie libre de rozamiento, sin obstáculo alguno. Hacia las fuerzas que se oponen a tal acción. Sin embargo, como es evidente, en esta perspectiva que pretende superar los sesgos epistemológicos presentes en los enfoques dominantes para el estudio de los movimientos sociales (Pleyers, 2018), éstos han salido nuevamente libres de todo pecado. Son otras fuerzas y no algún rasgo de ellos mismos lo que da cuenta de su fracaso. Por supuesto, no se puede ignorar que, efectivamente, los movimientos actúan en el interior de un sistema de fuerzas y que esa acción enfrenta resistencias de carácter conservador. Pero aquí queremos apuntar más allá. Consideramos que las dificultades para cambiar el mundo no están fuera de los movimientos sociales sino en su propia existencia. Desde la noción de *forma* que se encuentra en la obra de Marx y que ha sido desarrollada desde el enfoque denominado *marxismo abierto* (Bonnet, Holloway y Tischler, 2005) consideramos que los movimientos sociales son la *forma*, un modo de existencia de la lucha en el seno de la sociedad capitalista. Como modo de existencia, exterioriza y niega la relación de lucha que es constitutiva de las relaciones sociales capitalistas.

Los movimientos sociales como *forma* de la lucha

El punto de partida aquí es uno de carácter epistemológico y no es exclusivo del análisis de los movimientos sociales. Tiene que ver con la distinción entre el mundo inmediato, lo aparente, y una realidad sustancial que se presenta a sí misma en la apariencia pero que al mismo tiempo es negada en ella. Karel Kosik (1985:27), había planteado que “el mundo fenoménico tiene su estructura, su propio orden y su propia legalidad que puede



ser revelada y descrita. Pero la estructura de este mundo fenoménico no capta aún la relación entre él mismo y la esencia". Para evitar una interpretación dualista que incluso formulara la cuestión en términos de verdad y falsedad en relación con esencia y apariencia, Kosik aclara que no se trata de postular la existencia de dos realidades separadas, una de las cuales, la esencial, resultaría imposible de aprehender como no fuera por la pura especulación. En cambio, argumenta que no hay mayor realidad en una u otro, ni una distinción radical, pues "la realidad es la unidad del fenómeno y la esencia" (Kosik, 1985: 28). Una realidad que no tiene otro modo de manifestarse sino a través del fenómeno. Este, por tanto, expresa algo distinto de sí mismo. En consecuencia, en el fenómeno, la realidad sustancial se muestra pero al mismo tiempo se oculta. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué razones la realidad sustancial se muestra a sí misma en algo que no es ella misma, como algo distinto de sí misma? ¿Es el ocultamiento de la realidad sustancial en el fenómeno una propiedad inherente a la existencia de cualquier objeto real? Ciertamente, aquí se trata de una concepción de la realidad social, y no de cualquier realidad o de la realidad en general. Nos referimos concretamente a una sociedad capitalista. Lo característico de cualquier sociedad es que constituye, en todas sus manifestaciones, un producto de la actividad concreta de los sujetos. Son sus prácticas las que crean modos más o menos cristalizados de relación, convertidos en instituciones, normas, representaciones. En la sociedad capitalista ese proceso creativo se traduce en objetos aparentemente fijos que además ocultan su carácter de productos de la actividad humana. En cambio, se nos aparecen invirtiendo la relación, como "estructuras" que determinan las prácticas de los sujetos.

¿Por qué ocurre tal inversión en la sociedad organizada por el capital? La respuesta se halla en las condiciones en las que los sujetos realizan su actividad práctica productiva. El desdoblamiento de la realidad social en una sustancia y el modo en que se aparece, o su modo de existencia es resultado del carácter dual y antagónico del trabajo en el capitalismo (García Vela, 2015). A partir de aquí, llamaremos forma o modo de existencia a eso que Kosik (1985) denomina el fenómeno. No se trata simplemente de una sinonimia, pues con la noción de forma será necesario introducir el carácter antagónico de las relaciones sociales capitalistas, algo que no está contenido en la noción de fenómeno o mundo fenoménico de Kosik (1985).

Siguiendo a García Vela (2015), como señalábamos antes, es propio de la sociedad capitalista el desdoblamiento de la realidad social en una sustancia y su modo de aparición. El trabajo productor de mercancías tiene en el capitalismo un doble carácter:



como trabajo abstracto y trabajo concreto. No se trata de dos tipos de trabajo separados, sino de dos dimensiones propias de la actividad productora. Pero tales dimensiones no existen simplemente una junto a la otra: dan lugar a un antagonismo constitutivo de las relaciones sociales:

Las propiedades particulares del trabajo concreto dirigidas a crear valores de uso se contraponen a las propiedades sociales y sintéticas del trabajo abstracto creador del valor, es decir, el trabajo abstracto como síntesis social niega y anula todo carácter particular y concreto del trabajo. (García Vela, 2015: 28).

El trabajo concreto y el trabajo abstracto se encuentran, así, en una relación antagónica, de lucha. El producto del trabajo en las condiciones del capitalismo adquiere el carácter de mercancía, que es también antagónica: es al mismo tiempo valor de uso y valor (García Vela, 2015). El desarrollo del antagonismo produce que el valor y el valor de uso se manifiesten como dos modos de existencia distintos: por una parte el dinero en su carácter de equivalente universal y la mercancía como objeto con propiedades materiales concretas y con un valor de uso particular (García Vela, 2015).

En su aparición como el medio de intercambio, como cosa que se cambia por otras, el dinero no se presenta como el modo de existencia del valor y, por tanto, del trabajo abstracto. El dinero, pues, no sólo se presenta como una cosa separada y distinta de la mercancía, sino que en ese modo de aparición oculta, niega la realidad sustancial que lo constituye y al mismo tiempo el antagonismo cuyo desenvolvimiento expresa. Un desenvolvimiento que no es precisamente desarrollo lógico o predeterminado sino uno de lucha. Pues desde el momento en que la forma constituye el modo de aparición de una realidad sustancial que es negada, velada por la forma misma, es indiscutible que esa negación no es absoluta, es decir, no implica la supresión de lo que es negado. El trabajo abstracto no desaparece por ser negado en la forma dinero, ni el trabajo concreto es suprimido por el trabajo abstracto. Su relación antagónica implica la lucha: lucha de lo que es negado en contra de su propia negación. Lo que es negado, lejos de desaparecer, “existe en el modo de su negación” (Gunn, 2005: 127).

El antagonismo fundamental entre trabajo abstracto y trabajo concreto tiene como resultado que las relaciones sociales en el capitalismo existan como formas: forma-mercancía, forma-dinero, forma-salario, forma-estado, formas que “parecen ser autónomas respecto del capital y se presentan como un medio para transformar nuestras vidas o emancipar la sociedad” (García Vela, 2015: 16). Son, en cambio, el modo de existencia del antagonismo fundamental, un antagonismo que no se cristaliza



en las formas de una vez y para siempre sino, como habíamos señalado antes, se despliega como expresión de la lucha por negar y en contra de la negación. Las formas son modos de existencia de la dominación y, por tanto, la emancipación no puede desplegarse en su interior. Más bien, implica la lucha contra tales formas para disolver el núcleo sustancial que las produce: la explotación y la dominación capitalistas.

La lucha, en consecuencia, es el proceso constitutivo de las relaciones capitalistas y de su modo de existencia en las *formas*. Una lucha que no refiere a la experiencia empírica de la confrontación entre grupos sociales sino al antagonismo entre la creatividad y la autodeterminación humanas, y su negación en la forma de trabajo asalariado. Lucha que aparece reducida a mero conflicto de intereses entre diferentes grupos sociales, es decir bajo la forma, por ejemplo de lucha política o de movimientos sociales. La dinámica del antagonismo que fundamenta a la forma en tanto modo de existencia tiene su origen en la práctica humana misma. Los sujetos, privados de la autodeterminación, se resisten a la negación de su propia subjetividad. Y lo hacen rechazando a las formas mismas. La práctica constituye al antagonismo y, por tanto, “existe en sí misma, para sí misma y contra sí misma” (Bonfeld, 2004: 63). Desde esta perspectiva, proponemos mirar las acciones de protesta y los movimientos sociales como formas de existencia de esa lucha. Es decir, como procesos que aparecen exteriorizándose en el modo de conflicto enmarcado “dentro de los límites estatales y de la democracia liberal” (Tischler, 2016: 35). Como movimientos sociales, se trata de formas que exteriorizan la lucha pero que al mismo tiempo la niegan. La niegan como expresión del antagonismo al reducirlo a simple conflicto de intereses susceptible de ser tratado y resuelto en el marco de la institucionalidad política. Y niegan, en consecuencia, la existencia de la sociedad como lucha, como rechazo de la negación de la práctica social humana.

Pero como forma, en el movimiento social se expresa al mismo tiempo la lucha en contra de su captura dentro de los límites de la política estatalizada. Esto es, las luchas conceptualizadas como movimientos sociales constituyen la expresión, en forma de su negación, de los impulsos de los sujetos por ir más allá de las relaciones capitalistas. Las tentativas de transformación social que son negadas al ser capturadas mediante las nociones de movimiento social y toda su parafernalia conceptual.

Esta concepción nos permite comprender no solamente los cambios recurrentes en los rasgos empíricos de los movimientos sociales en términos de la manifestación del desbordamiento de la *forma*, sino también ofrecer una respuesta a la cuestión sobre la posibilidad de construir otra sociedad desde los movimientos sociales. Y esa respuesta



es negativa. No es posible lograr la emancipación, la transformación de las relaciones sociales capitalistas desde las propias formas en que ellas se exteriorizan. Como un modo de existencia del antagonismo fundamental de la sociedad capitalista, la emancipación no solamente no es posible desde los movimientos sociales sino que la única posibilidad radica precisamente en la lucha contra esa *forma*. Solo mediante el desbordamiento de la creatividad, del hacer humano, negado en la forma de trabajo y en la forma de movimientos sociales, que intenta construir por sí mismo, individual y colectivamente, en diversos espacios de la vida cotidiana, modos distintos de relacionarse, no mediados por el dinero sino por la solidaridad, el disfrute, la comprensión mutua. Sólo mediante el rechazo a la reducción instrumentalista de las nociones de movimiento social, negando prácticamente la separación entre objetivos y medios de la lucha. No hay unos objetivos colocados fuera y más allá del despliegue de la acción. La lucha se desborda frente a la normalización de la forma movimiento social, como un modo de expresión distinto de las vías institucionales, pero reconocido como un componente de las democracias occidentales (Della Porta y Diani, 2006), y por tanto legitimado como instrumento para la búsqueda del cambio social. La lucha emancipadora se expresa no solamente como tentativas al margen de los canales institucionalizados sino en contra de la propia forma de movimiento social. Al percibir esta negación de la forma movimiento, Sergio Tischler (2016) propone llamar a las luchas recientes “movimientos de insubordinación social”. Negación dentro de los movimientos sociales que expresa el desbordamiento de la forma, las tentativas de rechazo de lo que aparece negado precisamente en ella: la lucha.

Aunque a primera vista podría parecer un simple juego de palabras, nuestro argumento es que en los movimientos sociales lo que es negado es precisamente la lucha, entendida en términos del rechazo a la explotación, al aplastamiento de la creatividad y la subjetividad humanas, de sus capacidades de autodeterminación. Es decir, el rechazo a la deshumanización y, por tanto, la reivindicación de otras formas de actividad y de relación no basadas en el vínculo del dinero. Y esa lucha se exterioriza en la forma de movimientos sociales, velando aquella negación y presentando a sujetos agrupados en torno a identidades particularizadas por intereses que se despliegan en el marco existente de la explotación y la dominación capitalistas. Sujetos que aspiran a mejorar su vida material, a ser reconocidos políticamente o, en general, a lograr la satisfacción de demandas determinadas. Pero que en modo alguno implican la trascendencia del mundo existente. Esos movimientos sociales pueden expresarse de modos más o menos radicales, derrocar gobiernos y lograr el triunfo electoral de partidos de oposición,



ser cooptados por ellos o mantenerse en la resistencia, pero como formas de existencia, como negación de la realidad sustancial de rechazo a las relaciones sociales capitalistas, no apuntan a su trascendencia.

A modo de conclusión

La instauración de gobiernos denominados progresistas en diversos países de América Latina abrió grandes expectativas entre militantes de movimientos sociales y analistas en torno a las posibilidades de transformación social. Dos décadas después se discute acerca del significado de las derrotas electorales de esos gobiernos en un país tras otro o las crisis políticas en algunos más, así como sobre las razones del “retroceso”. Los movimientos sociales que, directa o indirectamente, contribuyeron a los triunfos electorales progresistas aparecen en el análisis, en primer término como víctimas de la represión cuando mantienen una resistencia a políticas que dan continuidad a orientaciones neoliberales, o bien son simplemente cooptados. Pero en cualquiera de los casos permanecen como alternativa para la profundización de los procesos progresistas. Se apela a la rearticulación con ellos como única alternativa a la profundización de esos procesos, o cuando menos a la preservación de lo logrado.

Sin embargo, no existe una crítica respecto a las posibilidades reales de emancipación desde los movimientos sociales. Se les imputa una capacidad transformadora que no está necesariamente justificada. A partir de los argumentos considerados en la ponencia, consideramos que los movimientos sociales son una *forma* capitalista, un modo de existencia que oculta y niega la lucha que realmente puede conducir a la emancipación social. Como se señaló anteriormente, la destrucción de las relaciones sociales capitalistas no es posible en el marco de las *formas*, que expresan la supervivencia del antagonismo fundamental propio de tales relaciones: el antagonismo entre trabajo concreto y trabajo abstracto. Por el contrario, la única posibilidad de transformación social radical se encuentra en la destrucción de esas formas, en la disolución de su antagonismo constitutivo. Los cambios recurrentes observables en los rasgos empíricos de los movimientos sociales, que los estudiosos suelen acomodar bajo la noción de las “novedades” de los movimientos constituyen la expresión más clara de la insubordinación, de la lucha permanente por trascender la *forma* movimiento y apuntar hacia la transformación radical de la actividad humana.

Bibliografía

Arkonada, Katu (2015). “¿Fin del ciclo progresista o reflujo del cambio de época en América Latina? 7 Tesis para el debate”, en: <https://bit.ly/3b7raRO>. Consulta: 14/06/19



Bayat, Assef (2012). "Politics in the city-inside-out", en *City & society*, Vol. 24, Issue 2, pp. 110-128.

Bonfeld, Werner (2004). "Clase y constitución", en John Holloway (comp.), *Clase = Lucha. Antagonismo social y marxismo crítico*. pp. 33-68. Buenos Aires: Universidad Autónoma de Puebla, Ediciones Herramienta.

Bonnet, Alberto, John Holloway y Sergio Tischler (2005). *Marxismo abierto. Una visión europea y latinoamericana*, vol. I. Buenos Aires: Universidad Autónoma de Puebla, Ediciones Herramienta.

Codas, Gustavo (2015). "Desafíos al ciclo progresista en América Latina". *Mate amargo digital*, en : <https://www.mateamargo.org.uy/2015/08/13/desafios-al-ciclo-progresista-en-america-latina/>. Consulta: 14/06/19.

Dhanagare, Dattatreya N, y J. John (1988). "Cyclical Movement towards the 'Eternal'-'Nine Theses of Social Movements': A Critique", *Economic and Political Weekly*, Vol. 23, No. 21, pp. 1089-1092.

Dinerstein, Ana Cecilia y Séverine Deneulin (2012). "Hope movements. Naming mobilization in a Post-development world", en *Development and change* 43(2): 585-602. International Institute of Social Studies. DOI: 10.1111/j.1467-7660.2012.01765.x

García Vela, Alfonso Galileo (2015). "Forma y sustancia: Una aproximación desde El Capital y los Grundrisse", en *Bajo el Volcán*, Revista del Posgrado de Sociología. Puebla, México: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Gunn, Richard (2005). "En contra del materialismo histórico: el marxismo como un discurso de primer orden", en Alberto Bonnet, John Holloway y Sergio Tischler (comps.), *Marxismo abierto*, vol. 1. Argentina, Ediciones Herramienta, Universidad Autónoma de Puebla.

Katz, Claudio (2017). "Desenlace del ciclo progresista", en *Estudios Críticos del Desarrollo*, Vol. VII, No. 12, Primer semestre, pp. 87-122.

Kosik, Karel, (1985). "El mundo de la pseudoconcreción y su destrucción", en *Dialéctica de lo concreto*. pp. 25-37. México: Editorial Grijalbo.

Mitchell, Robie (2016). "The Pink Tide Recedes: End of An Era?", en: <https://bit.ly/2LntOlo>. Consulta: 18/08/19.

Modonesi, Massimo (2015). "Fin de la hegemonía progresista y giro regresivo en América Latina. Una contribución gramsciana al debate sobre el fin de ciclo", en *Viento Sur*, (142), pp. 23-30, en: <https://bit.ly/3nhOcYH>. Consulta: 18/08/19



Pleyers, Geoffrey (2018). *Movimientos sociales en el siglo XXI: perspectivas y herramientas analíticas*. Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Rauber, Isabel (2015). "La clave del protagonismo popular. Gobiernos populares de América Latina, ¿fin de ciclo o nuevo tiempo político?", en: <https://bit.ly/3rWIPms>. Consulta: 19/08/19.

Schavelzon, Salvador (2017). "El fin de ciclo progresista sudamericano", en: <https://nuso.org/articulo/el-fin-de-ciclo-progresista-sudamericano/>_Consulta: 15/08/19.

Stefanoni, Pablo (s/f). "La lulización de la izquierda latinoamericana". *Le Monde Diplomatique* edición cono sur, en: <https://bit.ly/3beGSun>. Consulta: 14/06/19.

Zibechi, Raúl (2015), «Hacer balance del progresismo», Resumen Latinoamericano, en: <https://bit.ly/3rVXCfW>. Consulta: 14/06/19.



Recientes avances en la teoría del *framing* y su aplicación a los movimientos sociales latinoamericanos.

Enmarcando disputas por el sentido.

Marcelo Flavio Gomez

Resumen

La teoría de los enmarcados interpretativos (*framing*) lleva más de tres décadas de desarrollo en el análisis de los movimientos sociales alcanzando niveles de estandarización conceptual y metodológica que proporcionan una caja de herramientas operativas templadas empíricamente. Sin embargo, el examen de la producción disponible muestra un llamativo divorcio entre el *frame analysis* y las ricas problemáticas de la movilización colectiva en Latinoamérica: la producción internacional que desarrolla este enfoque casi no incluye a los movimientos sociales del Abya Yala, y son pocos los estudios de movimientos sociales de estas tierras que aprovechan las potencialidades que ofrece la madurez analítica de este enfoque. La ponencia se propone abordar esta desavenencia realizando una revisión actualizada de los desarrollos conceptuales recientes del *framing*, proponiendo posibles aplicaciones a movimientos sociales de nuestros países, y desplegando líneas de reflexión que puedan contribuir a la afinación teórica de los dispositivos analíticos del *framing* desde la rica experiencia latinoamericana. Se revisarán las principales contribuciones recientes del enfoque en la literatura internacional (conceptos como *reframing*, *counter framing*, *framing contests*, *contracción de marcos*, *prominencia*, *diversificación identitaria*, *frame hazards*, *ciberguetificación*, *light communities*) que permiten actualizar el conjunto de las categorías e hipótesis analíticas y plantear ejes de discusión sobre la aplicabilidad del enfoque para analizar fenómenos como la demonización de líderes sociales, las campañas a favor y en contra de la legalización del aborto y la ideología de género, las movilizaciones antipopulistas de clases medias, entre otros que dominan la escena latinoamericana hoy.

Palabras clave

Framing; Movimientos Sociales; América Latina; Comunicación social; Hegemonía.

Introducción

El llamado “framing” o teoría de los marcos interpretativos para entender los fenómenos de movilización, protesta, organización y acción colectiva contenciosa ya lleva tres décadas de desarrollo en la investigación de los movimientos sociales (en adelante



MMSS) ostentando un notable nivel de aceptación en el campo académico internacional¹. El “análisis de marcos interpretativos” ofrece una maduración de sus herramientas conceptuales y metodológicas para estudiar casi todas las formas de manifestación de la acción colectiva, desde las más organizadas y duraderas hasta las más episódicas y espontáneas. Podemos decir sin temor a errar que el “frame analysis” ha asumido un carácter modular, en buena medida estandarizado, con un *set* de categorías suficientemente testeadas empíricamente en el análisis de una infinita variedad de eventos históricos y casos en diversos contextos políticos y culturales. Su potencialidad analítica deriva también de su grado de especificidad y de la nitidez de sus objetos y unidades de análisis que hace posibles comparaciones transcontextuales, y permite la incorporación cuidadosa y controlada de aportes de otros módulos teóricos de múltiples campos disciplinares como la teoría del discurso, la teoría de la ideología, la psicología cognitiva experimental, las teorías de la comunicación, etc.

En esta ponencia vamos a abordar brevemente dos cuestiones del *framing* de cara a la problemática de la movilización social en nuestros países del Abya Yala: a) explorar los posibles motivos de la escasa aceptación que tiene el enfoque en nuestros países y el escaso interés de los investigadores del *framing* americanos y europeos en los fenómenos de movilización social latinoamericanos; y b) repasar los cambios y las novedades teóricas y analíticas surgidas en los últimos años y su posible aplicabilidad en casos de MMSS latinoamericanos.

La idea es ver cómo el *framing* puede enriquecer los estudios de casos de MMSS en nuestros países y simultáneamente cómo esa ampliación del campo de aplicación del enfoque puede contribuir a afinar su desarrollo analítico sometiéndolo a nuevos problemas.

El *Framing* y los MMSS latinoamericanos: Desconfianzas y desencuentros

Apenas repasamos la producción académica internacional vemos un claro déficit de cobertura de los movimientos sociales y los fenómenos de acción colectiva latinoamericanos. La revista *Mobilization* es el mejor exponente del análisis *mainstream* de la acción colectiva². En ella la ausencia pronunciada de la casuística latinoamericana se hace más marcada: hasta el año 2018 no había un solo artículo publicado basado en la teoría de marcos interpretativos sobre algún fenómeno latinoamericano.

La riqueza de la experiencia latinoamericana de movilización social no puede ser puesta en duda. Basta recordar que lo que hoy en la literatura se considera un marco maestro epocal de sinnúmero de movimientos sociales internacionales como “el



antineoliberalismo” fue instalado con repercusión mundial por primera vez por el movimiento zapatista mexicano. Las últimas dos décadas de nuestros países han dado lugar a un sinnúmero de procesos de movilización y movimientos de nuevo tipo como los “piqueteros” (desocupados) y las fábricas recuperadas en la Argentina, los “Sin Tierra” en Brasil, el movimiento campesino cocalero en Bolivia, los movimientos indígenas en Ecuador y Chile, además del crecimiento de movimientos tradicionales como los ambientalistas, feministas, de derechos humanos, y de pobres urbanos. El recurso a la acción colectiva de masas ha tenido un papel político decisivo en varios países: el “argentínazo” en el 2001, la insurrección indígena campesina en Ecuador en 2000, la guerra del agua y del gas con el ascenso de Evo Morales a la presidencia en Bolivia y la movilización de los pobres urbanos como sostén del chavismo en Venezuela, por mencionar solo algunos. Además, el ascenso de gobiernos populistas de izquierda o progresistas en diversos países durante los años 2000 ha generado un fenómeno de nuevo tipo como las movilizaciones conservadoras de las clases medias urbanas contra las políticas “populistas” y “la corrupción”, que han tenido un altísimo impacto político y que se emparentan con el surgimiento de nuevas derechas en los ’80 y ’90 en Europa y EEUU. La sorprendente vivacidad de la movilización social se mantiene hoy al observar la marcha de los migrantes centroamericanos a EEUU, el movimiento estudiantil universitario en Colombia y Chile, los movimientos contra la minería contaminante en Perú y otros países andinos, el feminismo en Argentina, entre muchos otros.

Más allá de cuestiones de idioma y niveles de socialización académica o financiamiento, conjeturar sobre los motivos por los que semejante volumen de eventos significativos brillan por su ausencia en las publicaciones científicas más representativas no es ocioso desde el punto de vista teórico. Con un poco de ánimo polémico se puede plantear que el paradigma *mainstream* no se adapta bien a las realidades de la movilización en el contexto latinoamericano. El tríptico de conceptos que sostienen su arquitectura (oportunidad política, estructuras de movilización y marcos interpretativos) partían del supuesto fuerte de la separación estricta sociedad civil / estado, y de la exterioridad entre movimiento social y sistema político institucionalizado, consagrando una geometría del conflicto estrictamente bidimensional: “lo social” y “lo político”.

Lo que ocurre en A. Latina tiende a desmentir o borrar la nitidez de esa separación: en Bolivia se instaura lo que el mismo presidente llama “el gobierno de los movimientos sociales”, en Brasil se alían al Partido de los Trabajadores, en Argentina lo hacen con el peronismo-kirchnerismo, en Venezuela integran las estructuras del Movimiento V



República y se hacen cargo de sinnúmero de políticas sociales y territoriales, y en Ecuador una parte importante de los movimientos indígenas y campesinos pasan a la oposición del gobierno progresista de R. Correa.

Hoy día en Argentina, una de las máximas referentes del feminismo es funcionaria de alto nivel del gobierno del neoconservador Mauricio Macri y el popular dirigente indígena Félix Díaz, también apoyó activamente la opción electoral conservadora hace tres años (Gómez, 2017b, p. 305/6). Los gobiernos progresistas latinoamericanos han impulsado y facilitado la organización de movimientos sociales de diverso tipo con dispar suerte... pero los gobiernos conservadores ¡también tienen una política de “movilización” de la sociedad civil! Movimientos politizados y una política movientizada son elementos difíciles de digerir para los esquemas *mainstream* del análisis de la acción colectiva destinados a las sociedades del capitalismo avanzado sólidamente institucionalizadas.

Otro de los posibles motivos en la escasísima producción académica latinoamericana de investigación sobre MMSS basada en los paradigmas dominantes en los países avanzados (como el *framing*, pero también como movilización de recursos o como oportunidades políticas) es que responden a tradiciones académicas anglosajonas afincadas en las filosofías pragmatistas, nominalistas e individualistas, mientras que el pensamiento social latinoamericano está mucho más formateado por las influencias europeas realistas, colectivistas o estructuralistas. El marxismo con su pluralidad de formas tiene un enorme peso en el análisis de este tipo de fenómenos y ha recibido un renovado impulso con el desarrollo de nociones como las de “hegemonía” de raíz gramsciana y otros aportes posestructuralistas sobre la teoría de la ideología (Laclau, entre muchos otros). Fuera del marxismo, teóricos como Castoriadis, Moscovici y Mellucci han tenido muy buena recepción y conceptos como “representaciones sociales”, “imaginarios” y “subjetividad” ocupan el espacio teórico de las problemáticas que son propias del enfoque del *framing*. Así, entre los pocos artículos que abordan el *framing* hay trabajos teóricos que se esmeran en criticarlo como los de Acevedo (2013) o parten de otras corrientes teóricas como Torres Carrillo (2009). Por supuesto están los que rechazan sin más desde el marxismo el concepto mismo de movimiento social o lo consideran directamente como un subterfugio teórico desclasante³.

El solitario trabajo de Aquiles Chihu Amparán (2006) (2007) (2016) en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa como editor en castellano de los artículos más importantes de Snow, Benford, Rochford y otros, y elaborando sus propias síntesis teóricas, ha realizado una importante contribución. Amparán trabaja con el instrumental



teórico y metodológico del enfoque pero sus objetos de investigación principales son fenómenos más ceñidos a la ciencia política: imagen pública, campañas electorales, coberturas noticiosas, spots de campaña, discurso político, etc. En menor medida analizó fenómenos de movimientos sociales como el zapatismo, la Marcha del color de la tierra y el movimiento El Barzón.

En países como Argentina, Chile, Colombia y Brasil es más frecuente que, para algunos aspectos específicos referidos a movimientos y acción colectiva, se introduzcan análisis utilizando *ad hoc* algunas categorías como marcos de diagnóstico, pronóstico y motivación, o haya referencias a las resonancias de los slogans o campañas que desarrollan determinados movimientos. Son pocos los grupos o proyectos de investigación que hayan sostenido con persistencia estudios basados en el enfoque de enmarcados interpretativos. En Argentina se pueden ver algunos resultados ya publicados sobre diversos MMSS en Gómez y Massetti (2017) y en artículos de Alzina (2017) sobre un movimiento de pobres urbanos y de Alvarado (2017) sobre movimientos pro y anti legalización del aborto. En Colombia, sobresale el trabajo de Victoria E. González (2019) sobre las coberturas de prensa de las marchas campesinas y estudiantiles.

De manera un tanto intrépida, nos proponemos entonces aquí comenzar a superar este desencuentro basado en un improductivo desinterés recíproco entre lxs investigadores del *framing* y el estudio de los MMSS en nuestra Abya Yala. Haremos también algunas puntualizaciones acerca de cómo los estudios de casos de procesos enmarcadores en Argentina y Colombia pueden contribuir a la discusión actualizada de diversas cuestiones que atañen a la afinación teórica y la actualización de los dispositivos analíticos del enfoque.

Los avances en la reconceptualización del *framing* y su aplicabilidad para los MMSS latinoamericanos contemporáneos

El robusto arsenal de conceptos que se fue desarrollando durante las décadas del '80 y '90 (alineamiento de marcos, enmarcados de diagnóstico, pronóstico y acción, efectos de resonancia, campos identitarios, etc.) fue paulatinamente erosionado por fenómenos como la intercomunicación digital de masas, los fenómenos de individualización y virtualización, la globalización cultural y económica, y las nuevas demandas y formatos de acción colectiva desafiante, propiciando sucesivos ajustes, virajes y cambios en la conceptualización y en las hipótesis teóricas. Veamos un somerísimo repaso de las innovaciones analíticas en el estado actual de las discusiones y cómo algunos



fenómenos de MMSS latinoamericanos pueden contribuir a la discusión y afinamiento del enfoque de marcos.

El giro beligerante

El origen del éxito de difusión del *framing* aplicado a los movimientos sociales proviene del hecho elemental de la insuficiencia de los esquemas de elección racional para entender la orientación a la acción colectiva desafiante. ¡Bring the culture back! era el grito teórico y las herramientas desarrolladas por Goffman y otros interaccionistas podían servir para un impulso inicial. El *framing* proveía conceptos que eran capaces de realizar la captación inicial de producción de sentido en torno a la pregunta ¿Cómo el descontento se convierte en predisposición a actuar colectivamente? Tilly, Tarrow, Zald, Klandermans y otros estaban empujando a abandonar el abordaje de los MMSS como “actores estrategistas no institucionalizados” y reforzaban su papel de innovación cultural y usinas de sentido que generaban y consumían toda clase de cogniciones, formas de percepción, creencias, mitos, relatos, evaluaciones morales y tradiciones. Los MMSS no apuntaban simplemente a conseguir cambios a través de medidas o leyes, sino que se orientaban sobre todo a cambiar el régimen de comprensión colectiva de determinados asuntos públicos. No obstante, los primeros trabajos de aplicación del *framing* eran claramente instrumentalistas y estrategistas: básicamente el trabajo de análisis de marcos era la exploración y búsqueda en un “cultural toolkit” de símbolos de injusticia para enarbolar en pos de movilizar consenso en torno a los reclamos. (Johnston y Noakes, 2005, p. 8) Los *frames* eran formas de analizar el patrón comunicacional de los MMSS. Slogans, consignas, discursos, spots, protestas callejeras, performances, mensajes, estilos retóricos, eran estrategias de conquista del consenso. El *framing* era una forma de entender la movilización como persuasión de masas.

El instrumentalismo estático sin embargo fue considerablemente removido a partir del trabajo de McAdam, Tarrow y Tilly “Dynamics of Contention” (2001) en donde la conceptualización dejó de girar en torno a los actores colectivos y comenzó a reparar mucho más en las alternativas del conflicto y el enfrentamiento. El “giro beligerante” del análisis de los MMSS llevó a incorporar conceptos que describieran mejor la dinámica de los enmarcados en tanto proceso contradictorio y tenso de producción de sentido. El *frame* pasó de ser una tarea estratégica de articular discursivamente amenazas y oportunidades para definir situaciones de manera compartida por amplios sectores y lograr su apoyo o participación, a una forma de lucha por la apropiación social de



espacios culturales e identidades y de intercambio y mediación de significaciones hasta ese momento desconectadas (Buecheler, 2011, p.196).

Benford y Snow (2000, p.624) se plantean tres formas de "*framing contests*" o contienda de enmarcados: contraenmarcados (por oponentes, autoridades y eventualmente los media); disputas de enmarcado dentro de los movimientos; y el impacto sobre el enmarcado de cambios o nuevos eventos en el contexto y/o sobre las audiencias. Los contraenmarcados de diagnóstico, pronóstico y motivación a actuar de los oponentes suelen obligar a hacer modificaciones importantes en las estrategias enmarcadoras de los MMSS (Johnston y Noakes, 2005, p.16). El condicionamiento recíproco de enmarcados comienza a ser objeto de atención privilegiada.

El enfoque dinámico focalizado en los procesos de *reframing* y *counterframing* ya no se focaliza tanto en el alineamiento de marco entre el MMSS y las audiencias destinatarias que hace posible su "resonancia" efectiva, sino en las respuestas cambiantes con éxitos y fracasos que se dan entre enmarcados, reenmarcados y contraenmarcados. Snow, Vliegenthart y Ketelaars (2019) proponen el análisis de los "frame hazards" o riesgos de enmarcado y señalan cuatro principales fuentes de fracaso en la resonancia del marco: a) exceso de ambigüedad o de cierta posibilidad de aplicación de marcos alternativos; b) errores de diagnóstico o de sobreextensión de marcos (pretender abarcar demasiados asuntos dispares); c) disputas de enmarcado inter o intraorganizacionales; y d) desplazamiento o pérdida de vigencia del marco por eventos o cambios del contexto y las audiencias.

Hay que considerar que este planteo es especialmente fértil para los contextos turbulentos tanto política como económicamente en que se desenvuelven los MMSS en nuestros países al proporcionar oportunidades para analizar todo tipo de "riesgos de enmarcado". Un caso bien nítido para ejemplificar la aplicabilidad de este tipo de análisis es lo ocurrido con el MMSS de pobres urbanos más importante de la Argentina: la Organización Barrial Tupac Amarú (en adelante OBTA) liderada por Milagro Sala. A partir de la victoria electoral y la asunción del gobierno neoconservador de M. Macri en 2016, tras una persecución judicial combinada con una catarata de denuncias en los medios que lograron gran resonancia con el encarcelamiento de Sala y de otros dirigentes, se precipitó en un acelerado proceso de disolución. El *framing* permite analizar con profundidad la "explotación simbólica" del nuevo contexto político tras la victoria electoral neoconservadora, y las estrategias mediáticas y judiciales coordinadas de "demonización" y estigmatización como herramienta de "aniquilación simbólica"



(Alzina, 2019) de una de las organizaciones de pobres urbanos más grandes de A. Latina.

El interés del caso reside justamente en la dinámica de confrontación de enmarcados antagonistas que se desatan tras el cambio inesperado de contexto político. El prestigio y la fortaleza en términos de resonancia de la OBTA era la credibilidad empírica que producía la enorme obra material visible desarrollada en 15 años de existencia: 10 mil viviendas construidas por cooperativas que agrupaban a miles de trabajadores, un barrio entero construido en la capital provincial, atención médica y odontológica gratuita, parque acuático y actividades deportivas y recreativas para niños, escuelas de todos los niveles de enseñanza autogestionadas por la OBTA, políticas de género y de defensa de la diversidad sexual y de las identidades de los pueblos originarios, infinidad de actividades artísticas y culturales, etc. Las nuevas autoridades y las elites locales plantearon un contraenmarcado que no negaba la obra material, sino que la hacía “fruto ilegal” de la malversación de dinero público y métodos extorsivos y patoteriles. El agresivo contraenmarcado buscaba instalar el eje “Corrupción y violencia = Logros materiales ilegítimos”. El contraenmarcado se orienta a hacer aparecer los logros materiales del movimiento como un lastre para los que tienen mayor estatus social y son inducidos a sentir que pagan esos logros “con mis impuestos”. La obra se convierte en fruto envenenado y la legitimidad se desplaza de la organización colectiva de los pobres y excluidos hacia los “honestos ciudadanos de clase media que pagan sus impuestos” y son los “verdaderos” financiadores de las obras.

Las coberturas mediáticas enfatizan también el contrapunto de los modos “decentes y civilizados” de la administración pública y la empresa privada frente a la autorganización de los pobres y excluidos como patotas irracionales manejadas despóticamente por una mujer indígena. La “moralidad” entendida como una “estética” de la decencia es un marco maestro típico de los defensores del *statu quo* que tiene fuerte congruencia con las narrativas meritocráticas de las clases medias individualistas, de forma tal de extirpar en los sectores medios de cualquier simpatía con la OBTA y su líder.

La dinámica cambiante del *frame contest* en este caso es notable: cuando los MMSS y DDHH que bregan por la libertad de Milagro y el cese de la persecución a la OBTA, comienzan a difundir los problemas de salud de la propia detenida y los vejámenes que sufre en la cárcel, las reacciones internacionales de importantes organismos de DDHH y personalidades del mundo (entre ellos el Papa argentino), y aparecen otros agentes de legitimación como intelectuales, artistas, y hasta instituciones universitarias que



enmarcan a Milagro Sala como víctima de abuso del poder político, logran que el proceso de “cristalización” (Snow et al., 2019) del *frame* “corrupción y violencia” se detenga y en cierto punto se revierta.

El escenario de contienda simbólica está dominado por un extraño contrapunto de emisores “fiables”: medios de comunicación y poder judicial vs. universidades que le otorgan premios y reconocimientos a Milagro e intelectuales, religiosos y personalidades de la cultura que masivamente la van a visitar a la cárcel.

La prominencia identitaria y la centralidad para la vida individual

Otra de las novedades que se remarcan en la literatura reciente es el análisis de la “centralidad” de los temas puestos en juego por el *frame* para la vida de los destinatarios (Benford y Snow, 2000: p. 620 y ss). La “prominencia” o “relevancia” en la vida personal y grupal es un factor clave para explicar la capacidad de penetración de un enmarcado en un segmento u otro de la sociedad. Los movimientos no tratan solo de convencer argumentativamente sino de acoplarse a la vida cotidiana, las preocupaciones y las sensibilidades de individuos y grupos. En virtud de esto, los enmarcados necesariamente tienen que calibrar bien cierta ambigüedad y un carácter difusamente alusivo porque les permite jugar con una variedad de experiencias personales y reacciones emocionales o activación de creencias (Buecheler, 2011, p. 216).

La lucha por la legalización del aborto en la Argentina muestra esta flexibilidad: los movimientos prolegalización han usado dos *frames* hasta el momento no competitivos sino complementarios como son el del derecho al aborto como tema de “salud pública” para salvar la vida de las madres pobres forzadas a practicar abortos clandestinos, y el marco “antipatriarcal” de derechos reproductivos, control de la sexualidad y soberanía sobre el cuerpo que abre una discusión cultural profunda sobre la maternidad y la identidad femenina (Alvarado y Gómez, 2019). Esta convivencia armónica parece tener una direccionalidad estratégica dual: mientras el marco de salud permite buena llegada en ámbitos políticos e institucionales, y aumenta las chances de apoyo entre las clases medias y altas, el marco antipatriarcal permite consolidar internamente las organizaciones feministas e introducir temas disruptivos en la cultura de masas, aunque genere mayores rechazos en lo inmediato.

La interpelación de las identidades y la búsqueda de alineamiento de los enmarcados propuestos con las “prominencias” identitarias de grupos y personas se convierten en tópicos privilegiados de análisis. Ganan terreno temas como la incidencia de las identidades personales (One-Ness=sexo, edad, raza, religión) y de las identidades por



categorías o roles sociales (We-Ness=clases, profesión, consumidores). Las identidades más relevantes para determinados grupos destinatarios del mensaje del MMSS, y la “pervasividad” o grado de invasividad de determinadas identidades sobre la vida y las interacciones personales, se convierten en ejes de las estrategias enmarcadoras.

Las identidades⁴ son proclamadas, reclamadas, imputadas, o negociadas en campos discursivos que van desde la interacción cara a cara hasta el espacio público ampliado enormemente por el ciberespacio donde el *framing* y la narración dan lugar a procesos identitarios múltiples y tensos (Snow, 2013, p.273).

Los MMSS se ven compelidos a personalizar su interpelación y a saber llegar o llamar la atención de múltiples identidades. El manejo de las dualidades identitarias y la personalización de los motivos de participación pueden favorecer la predisposición a la acción colectiva sobre todo cuando los motivos de descontento afectan transversalmente a las diversas identidades que la persona hace jugar en su vida social (ídem, p. 8).

La cuestión de las identidades tensa al máximo la aplicabilidad de la teoría a los fenómenos de la movilización colectiva en A. Latina, desde el momento en que los macroprocesos culturales del capitalismo avanzado global como la individualización, la diversificación identitaria, y la virtualización (van Stekelenburg, Roggeband y Klandermans, 2013, p. XX), no tienen una penetración tan significativa o se limitan solamente a las clases medias y altas de las grandes ciudades modernas.

En nuestra Abya Yala las identidades fuertes que concitan acción colectiva siguen siendo las de clase y etnia. Las identidades de afinidad de consumos y estilos de vida, más asociadas a la posición individual en el mercado (Polletta, Chen, Gardner y Motes, 2015, p. 25 y ss) son muy acotadas y no dan lugar a la proliferación de “lights communities” basadas en identidades débiles y las ciberguetificaciones de este tipo no tienen la misma importancia que se ven en los MMSS de los países de capitalismo avanzado. Además en nuestros países en la última década las identidades políticas a favor o en contra de fuertes liderazgos personalistas (Chávez, Lula, los Kirchner, Evo Morales, Correa) también ayudan a solidificar identidades robustas prominentes a la hora de enmarcar los procesos de movilización social.

La OBTA y Milagro son ejemplo de la prominencia monolítica de identidades “duras”: una identidad proclamada “ultraplebeya” (que enaltece pobres, negros, excluidos,



indígenas, mujeres, peronistas, revolucionarios, etc.) produce un fuerte choque simbólico con la sociedad provinciana “blanca” y de clase media tradicionalista. Las identidades disruptivas fuertes contribuyen enormemente a la consolidación organizativa y la motivación a la acción pero tienen costos de pérdida de apoyo o rechazo en sectores más vastos, aislamiento social y hostigamiento de los medios de comunicación.

Las clases medias conservadoras movilizadas contra los gobiernos populistas también apelan a autoafirmar identidades fuertes. La decencia moral y el mérito personal basado en la educación y el éxito laboral es el centro del *frame* de las movilizaciones contra los gobiernos corruptos “populistas” (Gomez, 2017a). El “shock moral” de raíz religiosa cristiana es propio del *frame* “anti ideología de género en las escuelas” (Gonzalez, 2019). Agitar fantasmas como la amenaza a la vigencia de costumbres arraigadas (baños unisex, que las mujeres deberán orinar paradas, que los niños serán incentivados a experimentar contacto homosexual en las escuelas, etc.) o que los políticos populistas “se están robando un PBI [producto bruto interno, NdA] entero” son recursos enmarcadores típicos que agitan el temor a la destrucción del “modo de vida normal”. Las *fake news* en las redes sociales se vuelven un recurso habitual de interpelación a estas identidades, sin esmero alguno por la argumentación o la fundamentación en marcos diagnósticos, apelando exclusivamente a la reacción emocional frente a una “amenaza identitaria” y la “degradación moral”. El movimiento contra la “ideología de género” en Colombia sostiene el papel de las creencias religiosas como una base o pilar incluso de la ciudadanía y la nacionalidad. En este sentido identidades como la de “padres” se proponen y son experimentadas como una identidad perversiva (Snow, 2013: 266) que invade muchas dimensiones de la vida individual. Son los “padres” los depositarios naturales de las creencias que hacen a la nacionalidad y la moral verdaderas y nada podría interponerse en su deber de transmitirles a sus hijos.

La incidencia de las redes sociales y la hiperconectividad

En una sociedad hípercomunicada, la exposición a múltiples marcos es lo normal por lo que los destinatarios suelen ensamblar los *frames* a los que están expuestos más que elegir entre uno u otro (Johnston y Noakes, 2005, p.16).

Con la panmediación de las tecnologías digitales, los MMSS comienzan a gozar de una “emancipación de la visibilidad” y pueden plantear su lucha por el reconocimiento a través de múltiples vías de acceso a audiencias y públicos extensos, incluso globales (Berenson, 2015). La llamada “dependencia asimétrica” con los medios tradicionales



que tienen los MMSS en cuanto a la necesidad de visibilidad y llegada a audiencias masivas empieza a ser atenuada por las redes y la web. Las redes sociales digitales son grandes socializadores de “experiencias personales” y de información alternativa. Hay una extensa serie de estudios que tiende a ver un cierto efecto de sustitución de la “acción colectiva” por la “acción conectiva” que permite una mayor personalización de los mensajes y la participación (Bennett y Segerberg, 2013).

Sin embargo, los MMSS latinoamericanos actuales no tienen todavía salvo excepciones un uso afiatado de las redes. En líneas generales los MMSS de pobres urbanos o de identidades devaluadas en general siguen siendo excluidos o discriminados sus temas y demandas en las redes sociales. En 2017 en la Argentina, la desaparición del joven Santiago Maldonado en medio de una represión a una comunidad indígena mapuche dio lugar en las redes sociales (Twitter sobre todo) a un contrapunto en el que las tendencias favorecían a los represores y colaboraban en la estigmatización y persecución de las organizaciones indígenas. Lo mismo ocurre ante las protestas callejeras de desocupados e incluso ante huelgas de trabajadores formales. Las redes digitales tienen un papel de apoyo solo en las movilizaciones de las clases medias conservadoras contra los gobiernos populistas o en las movilizaciones contra la violencia de género. En temas controvertidos como la legalización del aborto dividen a las redes sociales en paridad.

En A. Latina las plataformas comunicacionales estratégicas y de movilización del consenso siguen dependiendo de la capacidad de penetración de los medios audiovisuales y de prensa tradicionales. Hay que destacar que la presencia masiva de teléfonos inteligentes y la posibilidad de transmisión en tiempo real vía *streaming* tiene un importante papel en las formas de la represión de las protestas por parte de las fuerzas represivas: se trata de evitar la circulación de imágenes que puedan producir rechazo o herir la sensibilidad de las audiencias y eventualmente deslegitimar la represión ante la opinión pública.

Conclusiones

La potencia y diversidad de la movilización social latinoamericana sin dudas le presentan al análisis de *framing* una serie de desafíos teóricos importantes y también la oportunidad de afinar la aplicación de categorías. El carácter turbulento, cambiante e inestable del cuadro institucional y la agudeza del conflicto social y político en la mayoría de estos países cuaja bien con el giro beligerante que el análisis de enmarcados ha operado en los últimos años. Los efectos de “sociedad dividida” o “grieta” identitaria, que



difícilmente se den en contextos de sociedades de capitalismo avanzado, ofrecen múltiples oportunidades de aplicación del framing y sus herramientas para analizar la dinámica contenciosa de enmarcados.

En cambio resulta menos nítida la aplicabilidad de los análisis de diversificación identitaria y del peso de las hipercomunicación digital en la gestación de la acción colectiva. La presencia de identidades “duras” de clase, etnia, moralidad, religión y pertenencia política no se compadece con las tendencias a las identidades débiles atadas a los estilos de vida y consumo que se observan en los países centrales. Sin embargo, tanto las redes como ciertas identidades de clases medias comienzan a tener un papel importante en los enmarcados de las movilizaciones de las clases medias conservadoras, así como en la lucha contra la violencia de género.

Asimismo, el enfoque de enmarcados interpretativos sin dudas puede enriquecer el estudio de los MMSS de nuestros países sobre todo por la sensibilidad de este enfoque a las luchas por la significación y por el control sobre los recursos interpretativos.

Notas

¹ En 1986 la American Sociological Review publicaba el artículo de David Snow “Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation” en donde por primera vez los dispositivos que E. Goffman había propuesto para captar las formas en que las personas entienden las interacciones cotidianas y definen las situaciones para orientarse frente a ellas, son aplicadas a eventos como la participación en protestas y los movimientos sociales. En Snow, Benford y ots. (2014) y Della Porta (2014) se hacen pormenorizados balances de logros y debilidades conceptuales y metodológicas del enfoque.

² Además de los temas arraigados como los movimientos feministas, ecologistas y pacifistas, sobresalen entre sus preferidos las políticas represivas estatales, el surgimiento de grupos movilizados en Europa del Este, Asia y Africa, los movimientos de nueva derecha o contramovimientos conservadores, y las dimensiones actitudinales relacionadas con las emociones, la corporalidad y la personalidad. La exclusión de temas latinoamericanos es casi completa y sobresalen la escasísima presencia de temas como los desocupados o las luchas laborales. Ver <http://www.mobilization.sdsu.edu/index.html>

³ Ver varios autores que sostienen esta postura en Revista Theomai N°36/17.



⁴ Identidad colectiva es la conexión cognitiva, moral y emocional de un individuo con una comunidad, una categoría social, una práctica o una institución, que podría revestir carácter tanto imaginario como experimentado. Los rituales y narrativas alimentan esa conexión (Staggenborg, 2015, p. 129).

Referencias bibliográficas

Acevedo, Hemilse (2013). "Principales críticas conceptuales al *frame analysis*: del *frame al framing*" en *Revista Pilquen - Sección Ciencias Sociales*, vol. 2, núm. 16, junio-diciembre, 2013, pp. 1- 14.

Alvarado, Damián y Gómez, Marcelo (2019). "Los procesos de alineamiento de marcos interpretativos en torno a la cuestión del aborto en la Argentina: la prensa y los movimientos pro y antiabortistas". En Gonzalez, Victoria (ed.) *Los movimientos sociales como agentes de producción de significación. Estudios de caso en Argentina y Colombia*. Bogotá, Ed. Universidad Externado de Colombia (en prensa).

Alzina, Pilar (2019). "Ladrones, asesinos y violentos. Análisis de la cobertura de la prensa sobre la criminalización de Milagro Sala". En Gonzalez, Victoria (ed.) *Los movimientos sociales como agentes de producción de significación. Estudios de caso en Argentina y Colombia*. Bogotá, Ed. Universidad Externado de Colombia (en prensa).

Bennett, W. Lance y Segerberg, Alexandra (2013). *The logic of connective action. Digital Media and the personalization of contentious Politics*. London. Cambridge University Press.

Benford, Robert and David A. Snow (2000). "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment" en *Annual Review of Sociology*, Vol. 26 (2000), pp. 611-639.

Berenson, Alonit (2015). Journalism and Social Media Frame Social Movements: The Transition to Media Matrix. <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.78290>

Buecheler, Steven (2011). *Understanding Social Movements. Theories from classical era to the present*, Paradigm Publishers, London.

Chihu Amparán, Aquiles (2016). "Marcos de acción colectiva en el movimiento de El Barzón" en *Región y Sociedad. Revista del Colegio de Sonora*, Año XXVIII, N°66, Mexico, pp. 321-337. <https://bit.ly/2LiDpA6>

Chihu Amparán, Aquiles (2007). "Marcos interpretativos, identidad e imaginario en el mexicana movement" en *Región y Sociedad*, Vol. XIX, núm. 38, pp. 51-76, Revista del Colegio de Sonora, México, enero-abril de 2007. <https://bit.ly/2XeUM7v>



Chihu Amparán, Aquiles (2006). "El discurso del EZLN desde la perspectiva del Frame análisis" en *El Cotidiano* N°137, Revista de la realidad mexicana actual, pp. 62-73, UAM-Azcapotlco, México, mayo-junio, 2006.

Della Porta, Donatella (2014). *Methodological Practices in Social Movement Research*, Oxford Scholarship Online.

Gómez, Marcelo (2017a). "Radiografía de los movilizados contra el kirchnerismo. Resultados de una encuesta a la concurrencia del 8N" en Gómez y Massetti (comps). *Los Movimientos Sociales de la década ganada*, Ed. EDUVIM, Córdoba, 2017, pp.257-290.

(2017b) "Seis tesis sobre los movimientos sociales después de la década ganada: ¿el infierno está encantador?" en Gómez, M. y Massetti, A., op.cit, pp. 291-310.

Gomez, Marcelo (2018). "Análisis de clase, movimientos sociales y antagonismo: saliendo de la parálisis teórica" en Revista Theomai / Theomai Journal Estudios Críticos sobre Sociedad y Desarrollo / Society and Development Critical Studies, número 37 (primer semestre 2018). http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO_36/6.Gomez_36.pdf

Gómez, Marcelo y Massetti, Astor (comp.) (2017). *Los movimientos sociales de la década ganada*, Cordoba, Argentina, Ed. EDUVIM.

González, Victoria E. (2019). *Movilización Social en Colombia. Marchas Estudiantiles (2011) y Campesinas (2013)*, Bogotá, Ed. Universidad Externado de Colombia.

(2019). Los movimientos sociales como agentes de producción de significación. Estudios de caso en Argentina y Colombia. Bogotá, Ed. Universidad Externado de Colombia (en prensa).

Johnston, Hank y Noakes, John Eds. (2005). *Frame of Protest. Social Movements and the framing perspective*, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland.

McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, Ch. (2008). *Dynamics of Contention*. New York: Cambridge University Press.

Polletta, F. Chen, P, Gardner Y Motes, A. (2013). "Is the internet creating new reasons to protest?" en van STEKELENBURG y ots. op.cit., pp. 17-36

Snow, David A., Robert D. Benford, Holly J. McCammon, Lyndi Hewitt, and Scott Fitzgerald (2014). "The emergence, development, and future of the framing perspective: 25+ years since "frame alignment", en *Mobilization: An International Quarterly* 19(1), pp. 23-45

Snow, David A., Vliegenthart, Rens and Pauline Ketelaars (2019). "The Framing Perspective on Social Movements: Its Conceptual Roots and Architecture" en *The Wiley*



Blackwell Companion to Social Movements, Second Edition. Edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, Hanspeter Kriesi, and Holly J. McCammon. John Wiley & Sons Ltd. Published. <https://www.researchgate.net/publication/328120787>

Snow, David (2013). "Identity dilemmas, discursive fields, identity work, and mobilization: clarifying de identity-movement nexus" en van Stekelenburg y ota. op.cit., pp.263-280

Staggenborg, Suzanne (2016). *Social Movements*, New York. Oxford University Press.

Torres Carrillo, Alfonso (2009). "Acción colectiva y subjetividad: Un balance desde los estudios sociales" en *Folios* (30), pp. 51-74. Retrieved January 16, 2018, from: <https://bit.ly/2JRLBXO>.

Van Stekelenburg, Jacquelin, Conny Roggeband y Bert Klandermans Eds. (2013). *The future of Social Movement research. Dynamics, Mechanism, and Process*, University of Minnesota Press, Minneapolis.



Campo de ação: Atores, práticas e gramáticas.

Raul Nunes de Oliveira

Resumo

As teorias dos movimentos sociais podem ser divididas em grupos relativamente coesos em termos de problemas de pesquisa e de conceitos, mas apresentam pouco diálogo efetivo entre si, em parte porque estão voltadas a um conjunto específico de aspectos dos movimentos sociais. Nesse sentido, propõe-se integrar as famílias de teorizações sobre movimentos sociais num quadro mais amplo da sociologia política, amparado na teoria dos campos como teoria social de médio alcance e na teoria da subjetividade coletiva como teoria social geral. Da teoria dos campos, retém-se a concepção do campo como ordem social de nível médio que possui caráter dinâmico – isto é, um campo pode surgir, se consolidar e desaparecer a partir da interação entre os atores e entre os campos. Da teoria da subjetividade coletiva, é crucial o entendimento de que as coletividades humanas apresentam variadas características e estão sempre em constante interação, seja na forma de cooperação ou de conflito. A partir daí se desdobram três categorias presentes nos campos: atores, práticas e gramáticas. Os atores são as partes que se envolvem no conflito em algum nível, disputando determinados recursos num mesmo campo. As práticas correspondem à forma das interações entre os atores, que sempre combinam cooperação e conflito, com os atores podendo se organizar, coordenar suas ações ou entrar em confronto com outros atores. A terceira e última categoria corresponde a gramáticas, ou seja, aos enquadramentos e ideologias presentes num ator ou campo. O objetivo dessas categorias é condensar e integrar conceitos das teorias dos movimentos sociais.

Palavras chave

Campo; Movimentos sociais; Subjetividade coletiva; Teoria dos movimentos sociais; Sociologia política.

Introdução

Analisar qualquer acontecimento ou processo desde um ponto de vista sociológico perpassa pela construção de categorias analíticas capazes de organizar o emaranhado caótico que é a realidade empírica. A teoria produz a caixa de ferramentas heurísticas que permite ao sociólogo compreender, descrever e explicar um fenômeno, controlando um conjunto de características. A dupla tarefa da pesquisa é transformar conceitos em



categorias que deem conta dos dados e, em seguida, confrontar a teoria com os dados obtidos.

Nesse sentido, a interação contenciosa será considerada aqui como um campo de ação. Para isso, o presente trabalho trilhará o caminho da elaboração teórica, construindo categorias analíticas, e, depois, da esquematização das categorias para a operacionalização da pesquisa empírica. O principal debate teórico se dará com a teoria dos campos (Fligstein & Macadam, 2012), enquanto teoria social de médio alcance, e a teoria da subjetividade coletiva, enquanto teoria social geral (Domingues, 1995). As categorias de análise serão elaboradas a partir de debates mais próximos com a sociologia dos movimentos sociais.

O campo como subjetividade coletiva

O campo é um tipo específico de subjetividade coletiva marcada pelo conflito, mas que pressupõe cooperação. Para entender o campo e seus elementos num quadro ampliado de teoria social, é preciso que sejam escritas de antemão algumas linhas sobre a teoria da subjetividade coletiva, teoria esta que ajudará o presente trabalho a organizar seus conceitos.

A teoria da subjetividade coletiva é uma tentativa de superar o paradigma dicotômico das Ciências Sociais baseado na separação entre causalidade ativa e causalidade condicionante, paradigma este que foi levado a último termo no debate das décadas de 1970-80 sobre agência e estrutura. Domingues (1995) propõe a causalidade coletiva como a propriedade dos sistemas sociais (subjetividades coletivas) que tem como potencial a produção de efeitos (em outras subjetividades coletivas). Em realidade, a causalidade coletiva consiste na propriedade distintiva da subjetividade coletiva, ambas constituindo, concretamente, o mesmo objeto social.

A subjetividade coletiva consiste em práticas coletivas com propriedades específicas. Isso quer dizer que os agrupamentos sociais produzem efeitos coordenados qualitativamente diferentes do que seria a mera soma das ações individuais. Ainda assim, essa coletividade não é um todo coeso, apresentando-se, em vez disso, como um sistema de ações com maior ou menor grau de centramento (univocidade e coordenação). A causalidade coletiva é formada por uma combinação entre as dimensões hermenêutica, material, espaço-temporal e o poder.

Parte crucial dessa teoria é a adoção da interação como unidade analítica. A interação acontece na díade individualizada, mas também entre as próprias subjetividades



coletivas. Nesse sentido, uma determinada causalidade coletiva só pode ser compreendida em interação. Domingues (2018) distingue dois princípios da interação: organização e antagonismo. Embora o autor desdobre esses princípios em tipos específicos de interação, aqui será mantida a divisão binária. Afinal, cooperação (organização) e conflito (antagonismo) são as duas formas básicas da relação entre humanos e seus agrupamentos, forjando separações e articulações.

Exceto por situações de conflito radicalizado – como extermínios –, todas as interações sociais pressupõem algum nível de cooperação, sendo o nível elementar o do entendimento (Habermas, 2012). O entendimento consiste na busca pela compreensão da ação do outro; não de suas motivações ou objetivos, mas de seu significado. O entendimento não é sinônimo de consenso, ainda que seja caminho necessário para tal. Num processo comunicativo, a busca pelo entendimento é, antes de qualquer coisa, a concretização da necessidade subjetiva de auto-posicionamento no mundo (Mead, 1962).

Destarte, as subjetividades coletivas interagem em diferentes combinações entre conflito e cooperação, isto é, entre separação e união. A formação da divisão nós/eles, constitutiva da vida social, é o movimento sucessivo da construção de coletividades, que só são coletividades porque se diferenciam entre si. Não obstante, nem todas as subjetividades, individuais ou coletivas, se reconhecem como integrantes de todas as coletividades existentes (ou metade delas, pensando num conflito polarizado) – o que será discutido na seção sobre atores.

A rigor, todo conflito gera um campo de ação em torno de si, porque faz com que indivíduos e coletividades tomem parte, assumam algum papel. Com isso, teríamos infinitos campos em constante criação e destruição, haja vista a efemeridade da maior parte das interações conflituosas. Nesse sentido, em termos analíticos, um campo só merece tal denominação quando alcança estabilidade, ou quando há elementos suficientes para se evidenciar uma tendência à estabilidade. Sem isso, é pouco provável que um campo tenha valor sociológico.

O campo de ação é uma ordem social de nível médio em que atores interagem entre si com base em entendimentos compartilhados sobre os propósitos do campo, as relações estabelecidas no campo e as regras que governam o campo (Fligstein & Macadam, 2012). Um campo estável é aquele em que os atores podem se reproduzir, em que há alguma previsibilidade e que perdura por um período considerável de tempo.



Como subjetividades coletivas, os campos abarcam relações internas (dentro do campo) e externas (entre os campos), sendo sempre uma configuração provisória de coalizões de atores que disputam determinado recurso (ou a forma de distribuição deste recurso). O Estado é um campo de papel destacado na modernidade, uma vez que se apresenta como um emaranhado complexo de campos em relação, esses capazes de, em sua causalidade coletiva, influenciar, ou mesmo determinar, a constituição e direcionalidade das mais diversas subjetividades coletivas – sejam essas campos ou não.

Em suma, o campo representa uma subjetividade coletiva que tem no seu cerne o conflito pela (re)definição de seus termos (Bourdieu, 1998; Melucci, 1996), isto é, de sua espacialidade, aparecendo aos atores como uma cristalização no tempo (de abrangência variável, mas sentida como eterna no presente contínuo), que pressupõe formas legítimas e/ou rotinizadas de interação (ou seja, organização e ação) e conteúdos (quadros interpretativos, ideologias, moral), operacionalizados e forjados pelos atores, isto é, pelas subjetividades (coletivas e individuais) devidamente posicionadas no interior do campo.

Para dar conta da interação conflituosa como campo de ação estratégica, serão utilizadas categorias elaboradas a partir de distintas abordagens das teorias dos movimentos sociais, balizadas pela teoria dos campos de Fligstein e MacAdam e pela teoria da subjetividade coletiva de Domingues. Cada uma das três categorias – atores, práticas e gramáticas – conjuga tendências de um conjunto de trabalhos sobre movimentos sociais, articulando distintos conceitos que implicam uma mesma ideia e, mais importante, que descrevem os mesmos fenômenos concretos – ou ainda que sublinham elementos específicos de cada fenômeno.

Atores

Os atores são as partes que se envolvem no conflito em algum nível, disputando determinados recursos num mesmo campo. Na literatura, são chamados de: jogadores; classes sociais; incumbentes e desafiadores; dominantes e dominados. Aqui serão denominados *atores*, para além da conveniência da linguagem cotidiana, porque interessa a ação, ou melhor, a interação, e a autoconstrução desses enquanto tais. Os atores podem ser individuais ou coletivos.

É errôneo assumir que todos os atores num campo estarão sempre altamente mobilizados. Pelo contrário, os atores podem ser classificados, num primeiro aspecto, pelo nível de envolvimento com as disputas daquele campo (Mccarthy & Zald, 1977).



Pode-se dizer que *integrantes* são aqueles engajados em um grupo, coalizão ou lado da disputa, sendo os *adeptos* seus apoiadores costumeiros. Os *oponentes*, portanto, são os integrantes ou adeptos que compõem o “lado de lá” e devem ser combatidos. Enfim, o *público* diz respeito à parte que (ainda) não tomou lado no conflito.

Na sociologia dos movimentos sociais, a Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS) foi a corrente que mais se dedicou ao estudo dos atores. Toda a sociologia da ação de Touraine, precursor dessa corrente, consistiu numa batalha contra o individualismo metodológico e o funcionalismo. Por um lado, a rejeição à noção de que o indivíduo poderia ser entendido isolado da sociedade e, por outro, de que a sociedade poderia ser compreendida em si mesma. O “retorno do ator”, portanto, representava o retorno do sujeito como fruto da sociedade, mas que a todo o momento a produz.

O ator-produtor só pode ser trazido de volta numa sociologia que saia do imobilismo do problema da ordem e se volte à análise da dinâmica e do conflito. Touraine diferencia três tipos de conflito que buscam mudar aspectos da organização social e cultural: comportamento coletivo, luta e movimento social. O primeiro seria reativo, o segundo estratégico, mas específico, e, o terceiro, um projeto mais abrangente. Para o autor um movimento social seria

a combinação de um conflito com um adversário social organizado e da referência comum dos dois adversários a um mecanismo cultural sem o qual os adversários não se enfrentariam, pois poderiam se situar em campos de batalha ou em domínios de discussão completamente separados – o que impediria, por definição, tanto o conflito e o enfrentamento quanto o compromisso ou a resolução de conflito (Touraine, 2006, p. 19).

Assim, Touraine reforça o ponto mencionado anteriormente de que, num campo, é necessário que os adversários se reconheçam como tais, tendo como base entendimentos compartilhados. Essa visão é levada adiante por Alberto Melucci, que entende movimento social como “[...] a mobilização de um ator coletivo, definido por uma solidariedade específica, que luta contra um adversário para a apropriação e o controle de recursos valorizados por ambos” (Melucci, 2001, p. 35). Para Melucci, um movimento social é constituído pela solidariedade, pelo conflito e pelo objetivo último de rompimento dos limites de compatibilidade de um sistema social.

O processo de construção de um sistema de ação (coletividade) é, pois, denominado identidade coletiva. Esse processo, que é interativo e mediado, decorre da necessidade de orientação da ação e (auto)situação num campo de ação. A identidade coletiva



envolve a definição de meios, fins e campo de ação, isto é, a construção de consensos parciais sobre “nós” e “eles”; a mobilização de uma rede ativa de relacionamento entre as partes; e o investimento emocional de fazer parte de uma comunidade.

Deste modo, a construção de identidades coletivas conforma os atores (individuais e coletivos), implicando sua autopercepção enquanto tais e uma demarcação em relação aos outros. Entretanto, nem toda coletividade depende da existência ou construção de identidade, podendo apresentar variados níveis de centramento (Domingues, 1995). Junto com a forma de organização, a identidade compõe a intencionalidade de uma subjetividade coletiva.

A centralidade do conceito de movimento social para os autores da TNMS cria dificuldades analíticas. O problema ocorre na ordem inversa para os dois autores aqui analisados. Se em Touraine o grau de centramento é ainda elevado, em Melucci o descentramento é pressuposto. Uma forma de fugir a esse dilema seria a divisão corrente nos estudos organizacionais entre *movimentos sociais* e *organizações de movimentos sociais*, sendo os primeiros mais descentrados e, as últimas, mais centradas. De todo modo, essa é uma divisão precária para dar conta dos atores sociais concretos, uma vez que o centramento do ator depende tanto de sua identidade, quanto de sua organização. Movimentos sociais podem ter identidade forte e organização descentralizada, enquanto organizações podem ter identidade fraca e serem centralizadas e hierarquizadas. O debate será retomado nas sessões seguintes.

Práticas

As *práticas* correspondem à forma das interações entre os atores, que sempre combinam cooperação e conflito. Nos dois grandes momentos da interação conflitiva, os atores podem se organizar, coordenando suas ações, ou entrar em confronto com outros atores. Na sociologia dos movimentos sociais, quem mais se dedicou à investigação das práticas foram autores da Teoria da Mobilização de Recursos e da Teoria do Processo Político.

Um ponto de partida para pensar as práticas dos atores coletivos está nas contribuições dos estudos organizacionais. Preocupados com a compreensão de como se daria a ação coletiva sustentada no tempo e os cálculos para otimizar seu funcionamento e garantir o seu sucesso, esses estudos tenderam a observar as estruturas mais sólidas das coletividades, isto é, as organizações (aglomerados de recursos, inclusive humanos, destinados à obtenção de um bem coletivo). Nesse sentido, atentam-se ao



processo de mobilização de recursos para atingir um fim – dentre os quais está manutenção da própria organização (Mccarthy & Zald, 1977).

Com vistas a garantir a subsistência da organização e a efetividade das ações coletivas, os atores podem atingir variados níveis de centramento. Em realidade, quando essa preocupação se apresenta é porque aquele ator já possui um patamar elaborado de identidade ou coordenação. Em termos organizacionais, o centramento tem a ver com o grau e a forma de engajamento dos integrantes e com a distribuição interna das práticas organizativas (Nunes, 2017).

O debate sobre formas de organização tem um momento importante no começo do século XX, com o embate entre Lênin (1902) e Rosa Luxemburgo (2009[1904]). Para Lênin, o partido revolucionário deveria ser forte e centralizado, atuando como vanguarda a organizar a classe trabalhadora. Luxemburgo, por sua vez, era contra a centralização do partido e a divisão rígida entre vanguarda e massas, defendendo, antes, que a forma de organização deveria variar conforme o contexto, pois o partido deveria se forjar na luta concreta. A autora chega a admitir e valorizar a existência de greves “espontâneas”, não mediadas pelas organizações.

Assim, a mobilização de recursos pode assumir diversas feições, sendo uma delas angariar aliados para o objetivo comum. Essa mobilização, entretanto, pode se dar também em forma de contestação, como numa greve ou passeata. Precisamente para dar conta das formas de mobilização, Charles Tilly (1988) forjou a noção de repertórios de ação coletiva. Para o autor, cada sociedade, num determinado momento histórico, contaria com um repertório limitado de formas de agir coletivamente, isto é, cada performance de uma dessas formas seria um recurso a um arcabouço cultural já definido. Mudanças se dariam num longo prazo, com tentativas de levar aquelas formas de ação coletiva mais adiante.

Além de serem circunscritas a um repertório sócio-histórico, essas práticas coletivas são ainda modeladas pela estrutura de oportunidades naquele momento (Mcadam, Tarrow & Tilly, 2001), ou seja, dependem da conjuntura que se apresenta. Dependem, pois, de um cálculo dos atores entre o possível e o desejado, que leva em conta a configuração dos atores, das práticas e das gramáticas nos campos.

Além disso, táticas e estratégias são forjadas também face às crenças dos atores e sua identidade coletiva (Jasper, 2004). Nesse aspecto, a TPP tem pouco a dizer sobre os atores em termos de sua identidade. Por outro lado, ao voltarem o foco da análise para



as dinâmicas da política conflitiva, conseguem comparar diferentes atores em suas práticas, além de refletir sobre como estes se relacionam.

Um problema mais grave, porém, acomete essa vertente. A centralidade do do Estado na análise da política contenciosa eclipsa conflitos entre diferentes atores que não necessariamente interagem (prioritariamente) com o Estado, a exemplo de movimentos sociais que buscam promover mudanças culturais. McAdam, Tarrow e Tilly consideram que “identidades são políticas, então, na medida em que se envolvem em relações com governos” (McAdam, Tarrow & Tilly, 2001, p. 134, tradução minha). Na definição aqui desenvolvida, identidades são eminentemente políticas, uma vez que sua produção decorre do antagonismo entre atores.

Gramáticas

A terceira e última categoria corresponde a *gramáticas* e compõe a dimensão hermenêutica das interações entre subjetividades coletivas. De antemão, vale alertar que o uso de “gramática” aqui não segue a divisão corrente na linguística entre gramática (sintaxe), semântica e pragmática, isto é, forma, significado e uso da linguagem (Blühdorn, 1997). Ao contrário, segue a utilização idiossincrática do segundo Wittgenstein, em que a gramática perpassa todos os reinos da linguagem, não se atendo somente aos aspectos formais, mas abarcando também a significação e os usos concretos da língua (Dobler, 2011).

Conforme Wittgenstein, interessa a este trabalho entender os jogos de linguagem empregados pelos atores no exercício de entendimento dos outros. São perseguidos, portanto, os aspectos propriamente linguísticos, atrelados a um senso prático – isto é, os signos em suas regras e sentidos, como mobilizados em cada situação –, mas também os aspectos valorativos e estratégicos, mais intencionais, que produzem quadros interpretativos das situações.

Na sociologia dos movimentos sociais, esses quadros interpretativos receberam o nome de enquadramento (*frame*), num esforço de “trazer as ideias de volta” para as análises da TMR e da TPP. Benford e Snow (2000) entendem enquadramento como a produção de significados por parte dos atores coletivos com vistas a convencer algum público, seja membros, apoiadores, espectadores ou adversários. Desta maneira, o enquadramento de ação coletiva equivale ao processo significativo empreendido por coletividades de modo a se somar ou contrapor a um enquadramento hegemônico. Existe uma disputa pela construção dos significados que envolve movimentos sociais, mídia, governos locais e Estado.



O enquadramento é esquema interpretativo que permite aos atores localizar, perceber, identificar e categorizar ocorrências no seu espaço social ou no mundo, tornando-os capazes de organizar a experiência cotidiana e guiar suas ações. No caso dos atores coletivos em interações conflituosas, esses quadros interpretativos simplificam e condensam os significados do mundo, de modo a mobilizar possíveis apoiadores e membros, ganhar apoio de espectadores e desmobilizar antagonistas.

Desta maneira, seriam tarefas essenciais de enquadramento: identificar qual é o problema em questão; apontar o que ou quem seria responsável por causá-lo; sugerir alternativas para resolvê-lo e; instigar o público para agir nesse sentido. As duas primeiras tarefas estariam contidas no que os autores denominam enquadramento diagnóstico. A proposição de solução consistiria no enquadramento prognóstico e o chamado à ação, no enquadramento mobilizatório.

Embora essa noção de enquadramento estratégico vise atribuir maior agência aos atores, é necessário apontar que a produção de significados sofre uma série de constrangimentos. O primeiro e mais evidente tem a ver com a dependência que o prognóstico tem do diagnóstico realizado. Além disso, o enquadramento deve ser construído visando o contexto interno do movimento ou organização e o contexto externo, sobretudo o público a que se direciona. Ainda, o enquadramento deve levar em conta os elementos culturais disponíveis e a forma mais eficiente de atingir um objetivo, sendo essa escolha ponderada por fatores como a manutenção de membros e apoiadores – o que poderia ser dificultado com enquadramentos deveras amplos e fluídos, mais propensos a atingir espectadores. Finalmente, os atores muitas vezes levam em consideração os contra-enquadramentos, isto é, contendas interpretativas, assimilando elementos da linguagem adversária.

Esses quadros podem ser fabricados em processos estratégicos, discursivos e contestados. Os primeiros foram aventados nos parágrafos anteriores. Os discursivos dizem dos diálogos que ocorrem entre indivíduos para que cheguem a entendimentos coletivos sobre determinada interpretação, enquanto os contestados se referem às disputas entre indivíduos, grupos e diferentes coletividades para que se chegue a um quadro provisório.

Pensados de forma processual e negociada, esses quadros construídos relativamente a momentos e movimentos específicos podem ser abstraídos, remodelados, compartilhados e reutilizados. Quando isso ocorre, há a emergência de *master frames*, ou seja, enquadramentos amplos, que comportam uma multiplicidade de



enquadramentos, a exemplo da linguagem de “direitos”, que pode abarcar desde as lutas pelo direito ao próprio corpo até aquelas pelo “direito à vida”. Oliver e Johnston (2000), entretanto, alertam que não se deve confundir enquadramento amplo com ideologia.

O autor e a autora asseveram que, ao deixarem de lado o debate sobre ideologia ou trazê-lo à tona na roupagem do enquadramento, as análises sobre movimentos sociais perderam a capacidade de identificar elementos específicos relacionados às ações coletivas contenciosas. Entendendo ideologia como “um sistema de significação que une afirmações e teorias sobre a natureza da vida social com valores e normas relevantes à promoção da mudança social ou resistência a esta” (Oliver & Johnston, 2000, p. 7, tradução minha), Oliver e Johnston enfatizam o caráter mais intrincado e duradouro da ideologia. O enquadramento seria, pois, uma expressão pontual, planejada e externalizada da ideologia.

No meio do caminho entre enquadramento e ideologia, Sader (1988) propõe que se pense em termos de matrizes discursivas, isto é, a elaboração simbólica da experiência. Para o autor,

As matrizes discursivas devem ser, pois, entendidas como modos de abordagem da realidade, que implicam diversas atribuições de significado. Implicam também, em decorrência, o uso de determinadas categorias de nomeação e interpretação (das situações, dos temas, dos atores) como na referência a determinados valores e objetivos. Mas não são simples ideias: sua produção e reprodução dependem de lugares e práticas materiais de onde são emitidas as falas (Sader, 1988, p. 143).

A gramática possui, portanto, aspectos heurísticos, estratégicos e normativos. Neste último, para além das regras que podem impor sanções (externas) às subjetividades coletivas, a norma funciona como motivação para a ação (Domingues, 1995). Para Boltanski e Thevenot (2001), essas normas podem ser divididas em *cités*, isto é, esferas que contêm princípios de justiça acionados em momentos críticos, aqueles em que a prática rotineira é abalada pelo inusitado e surge a necessidade de reelaboração discursiva e justificação de posições e entendimentos. Num movimento similar, Honneth (2003) percebe os conflitos sociais como lutas por reconhecimento, sendo que essas lutas têm seu início na experiência de desrespeito por parte dos sujeitos. A luta se dá no âmbito das dimensões morais do reconhecimento intersubjetivo, procurando reforçar ou ampliar seu escopo.



O campo em ação

Apresentados os elementos que compõem o campo, cabe agora explorar os modos pelos quais estes se relacionam, produzindo subjetividades coletivas específicas. Antes, uma recapitulação. Os campos são subjetividades coletivas marcadas pelo conflito, onde se produzem atores, práticas e gramáticas numa configuração que é, em algum ponto, compreendida pelas subjetividades coletivas que deles participam. O conflito pode se dar tanto pela tentativa de se obter um recurso escasso, quanto pela redefinição mais radical do campo.

Na interação conflituosa há um conjunto de práticas legitimadas – ou ao menos conhecidas – pelos atores de um campo. Esses atores são constrangidos por uma série de fatores ao pôr em curso suas ações, dentre os quais: a estrutura de oportunidades, os repertórios internalizados e os objetivos a serem atingidos. Além disso, sua identidade coletiva e as gramáticas em uso são componentes essenciais para que seja tomado um caminho ou outro, uma vez que essa deliberação envolve crenças, valores e afetos. Cada interação, porém, reitera e modifica o repertório de contestação, dotando aquela ação de sentido histórico e situacional.

Outrossim, criatividade e ousadia são condições necessárias para qualquer (inter)ação. A identidade coletiva, ao abarcar concepções sobre mudança social e futuro, projeta possibilidades que tensionam a percepção do presente como um empecilho espaço-temporal. A relação entre passado, presente e futuro dá o tom da dinâmica dos atores no campo, uma vez que é na avaliação entre o que existiu, o que existe, o que pode e o que deve existir que está a tomada de posição.

Esse auto-posicionamento no campo está ligado a uma gramática que é realista, mas também valorativa. No primeiro sentido, a utilização da gramática dos direitos, por exemplo, implica a interação com as subjetividades coletivas capazes de concedê-los, sobretudo o Estado e suas instituições auxiliares. No segundo, os fundamentos de justificação moral (Boltanski & Thevenot, 1999) podem levar, por exemplo, o ator a desconsiderar interações violentas porque preza a vida humana acima de tudo, inclusive acima de ideais de igualdade.

Também as interações que constituem os atores internamente são passíveis de avaliação pragmática e valorativa. Assim, a organização depende de condições que constroem a ação, como as formas disponíveis de organização e a estratégia elaborada, bem como da identidade coletiva, da ideologia e da narrativa. Em verdade,



a forma de organização ou as formas de contestação podem ou não ser elemento central na dimensão hermenêutica de uma subjetividade coletiva.

Tanto os aspectos descritivos quanto os aspectos valorativos da gramática podem variar no tempo e a depender do sistema social em que se encontram. Ambos os aspectos, todavia, constroem-se mutuamente e em alguma medida. O que é verdadeiro e o que é correto se imiscuem na percepção da realidade e fabricam visões de mundo e narrativas específicas. Esses enquadramentos se tornam ideologia quando abarcam uma quantidade muito ampla de fenômenos e parâmetros, comportando grande coerência interna, mesmo em suas contradições.

A combinação entre atores, práticas e gramáticas configura não só uma causalidade coletiva peculiar, mas pode definir também o grau de centramento e intencionalidade de uma subjetividade coletiva. Uma interação conflituosa só se dá quando existe identidade coletiva, organização ou alguma gramática compartilhada – para cada ator individual qualquer um desses elementos pode ser o fator motivador da ação. O nível de engajamento varia conforme a força desses fatores combinados. Por fim, vale ressaltar que o impacto causal de uma coletividade não está diretamente atrelado a seu grau de centramento (Domingues, 1995).

Uma tipologia dos campos

A teorização até aqui realizada se deu em dois níveis: na ordem geral, dos sistemas sociais, e na ordem média, dos campos de ação. No primeiro caso, a preocupação foi com o caráter universal das subjetividades coletivas. No segundo, o caráter particular dos campos. Na pesquisa empírica, entretanto, o que se busca é a investigação da apresentação singular dos fenômenos sociais. Falta, então, uma reflexão sobre o caráter particular das subjetividades coletivas nos campos.

Domingues (1995) propõe uma tipologia das subjetividades coletivas conforme seu nível de centramento. Apresentando baixo nível de centramento, isto é, pouca organização e sem identidade definida, redes e categorias (classe, raça, gênero etc.) exerceriam impacto causal de maneira não intencional, ainda que possam, principalmente as categorias, se organizar e conformar identidades. Grupos e encontros apresentariam alto grau de centramento, sendo os primeiros mais permanentes e de identidade mais marcada e os últimos mais efêmeros. Os movimentos sociais e organizações teriam nível intermediário de centramento, com os primeiros caracterizados mais pela identidade e os últimos, pela organização. Por fim, sociedades seriam um tipo específico



de subjetividade coletiva, não só pelo alto grau de centramento, mas por sua vasta complexidade interna.

Em que pesem os problemas decorrentes de categorizações abstratas e sumárias, o agrupamento das subjetividades coletivas em termos de níveis de centramento pode ser interessante para a compreensão de determinados fenômenos sociais em suas manifestações concretas, podendo-se contrastá-las com um quadro de referências.

No caso dos campos, é mais comum que a análise recaia sobre coletividades de nível intermediário de centramento (movimentos sociais, sindicatos, associações, empresas, Estado), ainda que, na prática, atores com todos os graus de centramento estejam envolvidos em seu funcionamento. Vale resgatar, portanto, os tipos de atores no campo segundo seu nível de engajamento com a disputa, podendo ser: integrantes, apoiadores, público e adversários.

Por fim, pode-se decompor as práticas segundo sua finalidade interativa. As práticas reflexivas e formativas se atentam para a construção de estratégias, identidades e gramáticas. As práticas contestatórias são direcionadas ao momento pontual do conflito com adversários, enquanto que as mobilizadoras correspondem à tentativa de integrar na coletividade o público e os apoiadores. As práticas burocráticas se destinam a assegurar a continuidade das coletividades, enquanto que as panfletárias buscam a divulgação de suas ações e concepções. Por sua vez, as práticas emocionais dizem respeito à mobilização de sentimentos (Nunes, 2017).

Esquema analítico de um campo

Com a categoria *atores*, pretende-se compreender de que forma atores coletivos constroem subjetivamente o conflito em que estão inseridos, atentando para sua identidade, suas pautas, seus adversários e seus aliados. São observadas ainda as fronteiras identitárias dos atores individuais, seus pertencimentos coletivos e sua caracterização social. Na teoria dos campos de ação estratégica, essa categoria corresponde ao acordo entre os envolvidos sobre quem são os atores e como estes se posicionam num mesmo campo. Com esses dados é possível localizar os atores no campo, identificando as coalizões e os conflitos, bem como quais detêm maior poder, ou seja, quem consegue mobilizar mais recursos e influenciar a dinâmica do campo.

A segunda categoria corresponde a *práticas* e, no bojo da teoria dos campos ora adotada, diz respeito às concepções compartilhadas num campo sobre as regras que o regem, isto é, sobre as formas legítimas de ação e de organização. Isto posto, pensar



em termos de práticas é indagar quais são as tarefas internas à organização (comunicação, formação, questões estruturais), como estas são distribuídas (por afinidade, por autoindicação, por eleição, pelo diálogo) e de que maneira as decisões são tomadas (assembleia, reunião, votação). Do mesmo modo, envolve questões quanto à ação contestatória propriamente externa da coletividade, isto é, quais as estratégias, táticas e formas de ação utilizadas para atingir seus objetivos.

A terceira e última categoria, *gramáticas*, compreende, na teoria dos campos, o quadro interpretativo mais amplo dos atores, segundo o qual esses prefiguram a realidade do campo. Na pesquisa empírica, as gramáticas consistem nas narrativas produzidas pelos atores sobre como esses estão distribuídos no campo e quais são as razões e os efeitos disso, ou seja, como funciona e por que funciona de determinado modo aquele campo. Destarte, é necessário desvendar quais são os elementos simbólicos e quais as estratégias persuasivas adotados na construção desses enquadramentos. Por fim, compete à análise observar se há enquadramentos amplos, ou seja, um léxico compartilhado por uma gama variada de atores (inclusive adversários) e em que medida se pode dizer que há quadros valorativos que perduram no tempo (ideologias, gramáticas morais).

Conclusão

Esse trabalho apresentou uma proposta de abordagem integrada para a análise de movimentos sociais através da teoria dos campos, como teoria social de nível médio, e a teoria das subjetividades coletivas, como teoria geral. Para tanto, foram forjadas as categorias de atores, práticas e gramáticas a partir das teorias dos movimentos sociais. Com essas três categorias, pretendeu-se elaborar uma visão multifacetada dos campos envolvendo diferentes níveis de análise e aliando cultura, conflito e condições estruturais, elementos que geralmente permanecem dispersos nas diversas teorias (e análises) dos movimentos sociais. Atores, práticas e gramáticas são categorias analíticas que, muitas vezes, aparecem sob outros nomes nas observações sobre os movimentos sociais, tanto nos estudos acadêmicos quanto na própria ação dos sujeitos coletivos. O esforço de alinhar essas categorias numa teoria de campos tem como objetivo dar maior nitidez à descrição e análise dos fenômenos envolvidos nas interações contenciosas, sobretudo no estudo dos movimentos sociais.

Referencias

Alonso, A. (2009). As teorias dos movimentos sociais – um balanço do debate. *Lua Nova (Impresso)*, v. 76, p. 49-86.



- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: an overview and assessment *Annu. Rev. Sociol.* 2000. 26:611–39.
- Blühndorn, H (1997). A relação entre pragmática, semântica e gramática. *Revista de Estudos da Linguagem*, Belo Horizonte, v.6, n.2, p.5-43, jul./dez.
- Boltanski, L., & Thevenot, L. (1999). The sociology of critical capacity. *European Journal of Social Theory*, v. 2, n. 3, p. 359-377.
- Bourdieu, P. (1998). *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- Dobler, T. (2011). *Wittgenstein on Grammar and Grammatical Method*. 2011. PhD Thesis (Philosophy) - School of Philosophy, University of East Anglia, Norwich.
- Domingues, J. M. (2018). *Emancipação e história. O retorno da teoria social*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Domingues, J. M. (1995). *Sociological Theory and Collective Subjectivity*. Londres/Basingstoke/Nova York: Macmillan/Saint Martin's Press.
- Fligstein, N., & Mcadam, D. (2012). *A theory of fields*. Oxford: Oxford University Press.
- Habermas, J. (2012). *Teoria do Agir Comunicativo*. São Paulo: Martins Fontes.
- Honneth, A. (2003). *Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais*. São Paulo: Editora 34.
- Jasper, J. (2004). A Strategic Approach to Collective Action: Looking for Agency in Social-Movement Choices. *Mobilization: An International Quarterly*: February 2004, Vol. 9, No. 1, pp. 1-16.
- Lenin, V. I. (1902). Que fazer? *The Marxists Internet Archive*. Disponível em <http://www.marxists.org/portugues/lenin/1902/quefazer/index.htm>
- Luxemburgo, R. (2009). Questões de organização da social-democracia russa (1904). In I. Loureiro (Org.). *Rosa Luxemburgo: textos escolhidos*. São Paulo: Expressão Popular.
- Mcadam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mccarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: a partial theory. *American Journal of Sociology*. n. 6, 1212-1241, May.
- Mead, G. H. (1962). *Mind, Self and Society: from standpoint of a social behaviorist*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Melucci, A. (1996). *Challenging codes: collective action in the information age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Michels, R. (1982). *Sociologia dos partidos políticos*. Brasília: Editora Universidade de Brasília.



Nunes, R. (2017). Organização e ciberativismo: apontamentos para um debate. In: ABCiber 10 – X Simpósio Nacional da ABCiber, 2017, São Paulo, SP. *Anais...* São Paulo: ABCiber.

Oliver, P., & Johnston, H. (2000). What a good idea! Frames and ideologies in social movement research. *Mobilization* 5: In press.

Sader, E. (1988). *Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da grande São Paulo (1970-1980)*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Tarrow, S. (2011). *Power in movement: social movements and contentious politics*. Cambridge: University Press.

Tilly, C. (1978). *From mobilization to revolution*. Nova York: Random House.

Touraine, A. (2006). Na Fronteira dos Movimentos Sociais. *Sociedade e Estado*, Brasília, v. 21, n. 1, p. 17-28, jan./abr.



Educação do campo no Brasil: Uma trajetória de lutas e conquistas

Joelma Miriam de Oliveira¹

Maria Iveni de Lima Silva²

Resumo

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em construção, uma dissertação de mestrado que apresenta considerações sobre os sentidos atribuídos aos saberes camponeses nas Práticas docentes realizadas nas escolas do campo. Os povos do campo historicamente ocuparam um lugar de inferioridade em relação ao urbano, como também, a educação ofertada aos camponeses era descontextualizada da realidade local. Nesse sentido, a partir das discussões na trajetória acadêmica surge a nossa questão problema: Como se deu a conquista por uma Educação específica e diferenciada para os povos do campo no Brasil? Nossa Abordagem Teórica é a dos Estudos Pós-Coloniais, pois suas discussões sobre as epistemologias silenciadas possibilitam-nos um olhar outro para com os acontecimentos durante o processo de luta por uma educação diferenciada para o campo. Realizamos uma pesquisa bibliográfica objetivando identificar e analisar os principais fatos na luta por uma Educação do campo; utilizamos a técnica de análise do conteúdo com o objetivo de compreender como se deu a conquista por uma Educação específica e diferenciada para os povos do campo no Brasil. Os resultados apresentam que a princípio a educação ofertada no território camponês era pautada no modelo urbanocêntrico, foi a partir de muitas reivindicações, lutas dos Movimentos Sociais e articulações como a Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, entre outras, que os camponeses passaram a ter espaço nas políticas educacionais do país. Por fim, compreendemos que a Educação do Campo é fruto das lutas dos Movimentos Sociais que lutaram por uma educação específica e diferenciada.

Palavras chave

Educação do Campo; Movimentos Sociais; Políticas Públicas; Sujeito Camponês; Escola do Campo.

Introdução

A Educação do Campo é uma modalidade educacional que propõe uma aproximação das práticas educativas desenvolvidas nas escolas do campo com a realidade dos camponeses, para que os sujeitos deste território não sejam submetidos a práticas descontextualizadas de sua realidade, tendo em vista que historicamente a educação



escolar ofertada para os camponeses esteve voltada para atender aos interesses da sociedade moderna, desconsiderando as especificidades da população do território rural.

Diante do exposto, ressaltamos que a Educação do Campo advém das lutas dos povos do campo pelo direito a uma educação específica e diferenciada. Fruto das lutas dos Movimentos Sociais, ela busca conquistar espaço nas políticas públicas e proporcionar aos sujeitos camponeses reconhecimento e valorização de suas epistemes. A perspectiva da Educação do Campo é de que o povo que vive e trabalha no território camponês seja educado de maneira a se articular e se organizar para assumir a condição de sujeitos protagonistas de suas histórias. Para tanto,

A Educação do Campo se coloca em luta pelo acesso dos trabalhadores ao conhecimento produzido na sociedade e ao mesmo tempo problematiza, faz crítica ao modo de conhecimento dominante e à hierarquização epistemológica própria desta sociedade que deslegitima os protagonistas originários da Educação do Campo como produtores de conhecimento e que resiste a construir referências próprias para a solução de problemas de outra lógica de produção e de trabalho que não seja a do trabalho produtivo para o capital (Caldart, 2009, p. 38).

Então, para compreender como se deu a conquista por esta modalidade educacional faremos um panorama histórico sobre a oferta da educação escolar para os povos do território rural no Brasil. Para tanto, temos como questão problema: como se deu a conquista por uma Educação específica e diferenciada para os povos do campo no Brasil? Nossa Abordagem Teórica é a dos Estudos Pós-Coloniais, pois suas discussões sobre as epistemologias silenciadas possibilitam-nos um olhar outro para com os acontecimentos durante o processo de luta por uma educação diferenciada para os povos do campo. Realizamos uma pesquisa bibliográfica objetivando identificar e analisar os principais fatos na luta por uma Educação do campo no Brasil.

História da educação escolar ofertada no território camponês do Brasil

Nesta seção, trataremos dos aspectos voltados para a história da oferta da educação escolarizada nos territórios camponeses do Brasil, apresentaremos três fases históricas que marcam essa trajetória por meio do: Paradigma da Educação Rural Hegemônica que emerge no final do século XIX e início do século XX; o Paradigma da Educação Rural Contra Hegemônica que marca os anos 50, 60 e 70 e o Paradigma da Educação do Campo que tem início a partir da década de 80.



No século XIX aconteceram grandes transformações nos setores político, econômico e social do país o que originou as revoluções agroindustriais e industriais. Isso ocasionou grandes mudanças na sociedade brasileira e levou os grandes latifundiários a construir escolas em suas terras, para ofertar educação escolar à população do território rural. No entanto, o modelo educacional ofertado não atendia aos interesses dos povos camponeses, para Caldart (2002) era “um tipo de educação domesticadora e atrelada a modelos econômicos perversos” (p. 19).

No início do século XX, a educação escolar estava relacionada ao mundo da produção capitalista e à necessidade de urbanização, industrialização devido ao processo de desenvolvimento da modernização. No Brasil, pautada nesses moldes, a educação escolar ofertada no território rural consolidou-se nos anos 20 e 30 por meio do Ruralismo Pedagógico que propagava uma educação escolarizada com objetivo de fixar os sujeitos no campo.

Neste contexto, a educação escolar esteve pautada por práticas curriculares descontextualizadas da vida, do trabalho e da cultura dos povos camponeses, pois o território rural era compreendido como lugar de atraso e que para sair desta condição, precisava ser industrializado de acordo com Caldart (2004). Nesse cenário, nas Práticas Docentes desenvolvidas não havia espaço para os saberes dos camponeses, os quais conseqüentemente eram excluídos dessas Práticas, pois as referências para a construção do conhecido eram os saberes urbanocêntricos.

A partir da década de 1930, a educação escolar nos territórios camponeses passou a ocupar espaço nas agendas governamentais, devido à preocupação com a necessidade de pessoas capacitadas para trabalhar com os novos maquinários de produção. O fortalecimento da agricultura passa a ser relacionado à educação formal, pois se compreendia que os progressos desejados seriam advindos do processo de modernização agrícola, por isso os trabalhadores/as deveriam saber os conhecimentos básicos, no que se refere ao contexto urbanocêntrico e industrial para lidar com as máquinas e as novas tecnologias. Neste cenário, houve um grande aumento da oferta da educação escolar no território rural, a qual servia para atender as expectativas da produção, uma educação escolar voltada para uma cidadania urbana que tinha como referência os critérios de produtividade.

Nesse sentido, os povos do território rural ao serem submetidos a uma educação escolar descontextualizada lhes foram negada a condição de sujeitos epistêmicos, ficando a mercê dos conhecimentos da sociedade moderna urbanocêntrica. Nesse contexto, a



educação escolar ofertada aos sujeitos do campo partia do pressuposto de que o território campesino era esvaziado da condição epistêmica, por isso não tinha nada a oferecer para a educação escolarizada. Isso se dá a partir daquilo que os Estudos Pós-Coloniais chamam de Racialização territorial e do sujeito, pois tanto o sujeito como o território tem sua condição epistêmica retirada. Assim, a Racialização segundo Quijano (2005), que justifica a inferioridade dos sujeitos campesinos, se amplia a um nível de Racialização territorial, na qual não há espaço para os saberes, os modos de vida e as formas de produção comunitárias e familiares dos povos campesinos.

Neste contexto, compreendemos que o Paradigma da Educação Rural Hegemônica sustenta-se nas pilastras da Racialização e da Racionalização que propagam a ideia de saberes válido e não válidos. Esse Paradigma foi instituído e direcionado ao mundo da produção capitalista e à necessidade de urbanização e industrialização da sociedade, como também da subserviência do território rural ao território urbano. A educação escolar ofertada era alicerçada em Práticas Docentes descontextualizadas da vida, do trabalho e da cultura dos povos campesinos. Para tanto, de acordo com Lemos (2013)

A concepção de educação, que desvinculava a vida dos povos campesinos dos saberes científicos, buscou substituir os saberes e as atitudes destes povos por conhecimentos científicos e valores urbanos, promovendo a desigualdade entre os que viviam no território rural e aqueles que viviam no território urbano classificando-os como inferiores e superiores, respectivamente (p.22).

Já, na passagem da década de 1930 para 1940, a sociedade hegemônica priorizou a contenção dos grupos campesinos por meio de uma educação escolar instrucional que formava para as primeiras letras, essa educação era direcionada por meio dos conhecimentos científicos, assim, as epistemes produzidas no território campesino ficavam as margens do processo educativo. Neste cenário, o pensamento pedagógico rural tinha como desafios a serem superados o analfabetismo, a expansão da instrução agrícola e rural aos povos do campo, além da formação técnico-profissional e universitária de acordo com Silva (2015).

Em 1950 aconteceu a Campanha Nacional de Educação Rural, que tinha como objetivo contribuir com “o processo evolutivo do homem rural nele despertando o espírito comunitário, a ideia de valor humano e o sentido de suficiência e responsabilidade” (PAIVA, 2003, p. 65). Esta proposta buscava capacitar os trabalhadores rurais para conhecer e acompanhar as mudanças tecnológicas.



O Paradigma da Educação Rural Hegemônica tinha uma atenção voltada para o sentimento comunitário, contudo este sentimento de comunidade estava distante de uma análise crítica do contexto social, configurando-se simplesmente como uma oportunidade de controle funcional das diferenças camponesas através do desenvolvimento técnico. Neste sentido, o tratamento funcional das diferenças e o poder colonial sempre permearam o Paradigma da Educação Rural.

Ressaltamos que nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil estava sobre o regime da Ditadura Militar e existiam várias tentativas de desarticulação das lutas sociais brasileiras, inclusive as lutas dos povos do campo, as mobilizações nacionais contra hegemônica foram marcadas pela decadência. Neste cenário, a Colonialidade manteve a ordem capitalista e das elites latifundiárias, já os Movimentos Sociais que lutavam pelos direitos negados a população do campo foram marcados pela criminalização.

No entanto, os Movimentos Sociais não se acovardaram e mantiveram suas bandeiras de luta por meio da resistência, o que ocasionou o surgimento de debates e reivindicações contra o sistema ditatório e ao desenvolvimento tecnicista em curso. Existiam muitas reivindicações dos Movimentos Sociais e das pessoas que eram comprometidas com a Educação Popular, que acreditavam num modelo de sociedade democrática e que por meio da liberdade poderiam transformar as estruturas sociais, através da participação da grande massa popular nos processos de tomada de decisões. Os movimentos populares criticavam a sociedade capitalista industrial, pois ela excluía determinados sujeitos através de várias formas de institucionalização e opressão, principalmente, por meio do processo de escolarização.

Contra o modelo da educação escolar hegemônica que atendia os interesses da elite, surgiram manifestações e propostas de outras formas educativas que tinham como objetivo a valorização das classes populares, por meio do viés da Educação Popular. Neste contexto, se destacaram o Movimento de Cultura Popular (MCP) e o Movimento de Educação de Base (MEB) (Paiva, 2003).

No Brasil, Paulo Freire foi a principal influência da Educação Popular, uma educação que confronta a Pedagogia Tradicional voltada para uma prática de reprodução de conteúdos. A partir da Educação Popular a relação entre as vivências dos sujeitos em seus contextos orientam a construção do conhecimento e as prioridades do que é necessário no processo de aprendizagem. Política e educação são indissociáveis nas práticas educativas, em que a educação é compreendida como uma das possibilidades para as transformações sociais (Freire, 2005).



Os estudos de Freire foram de contribuíram para a construção de uma Educação Popular do Campo, defendida e almejada pelos sujeitos oprimidos que lutaram pela emancipação e valorização das classes populares rurais. Estes movimentos pautavam-se na ideia de que “a leitura crítica do mundo é um que fazer pedagógico-político indicotomizável do que fazer político-pedagógico, isto é, da ação política que envolve a organização dos grupos e das classes populares para intervir na reinvenção da sociedade” (Freire, 2000, p.21).

Neste sentido, o Paradigma da Educação do Campo se caracteriza pela sua vinculação às lutas de classe, principalmente direcionado à construção da Reforma Agrária no Brasil. Esse Paradigma prioriza formas outras do fazer pedagógico pautado nas vivências dos sujeitos sociais marginalizados na sociedade hegemônica. Assim, a Educação Popular contribui com o Paradigma da Educação do Campo que segundo Costa (2012),

Não pode ser entendida fora do conceito de educação popular. Sabemos que esta nasceu fora da escola, mas como concepção de educação ela teve e tem grande influência na educação escolar. A educação popular faz opção pelo resgate da função social da Educação por meio de um novo projeto de sociedade (p. 121).

A Educação Popular contribuiu para projetos outros de educação escolar para os povos do território campesino, até hoje, ela possui grande influência nos debates sobre educação. É uma modalidade educacional que emergiu num período em que o Estado descuidou da educação escolar para as populações que residem nos territórios campesinos. No entanto, durante o período da Ditadura Militar no Brasil houve em torno da educação brasileira um regime de repressão e controle social dos conflitos, por meio de uma lógica de obediência. A escola passou a ser um lugar de negação das identidades dos sujeitos do campo, tendo em vista que a identidade urbana foi imposta como modelo ideal. Neste contexto histórico, muitas convicções teóricas e políticas foram castigadas, entretanto, foram desenvolvidas e evoluíram discretamente em função da redemocratização do país.

Entre os movimentos organizados que lutaram pela redemocratização do Brasil e pela afirmação cultural e educacional dos povos do campo, podemos destacar a influência do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que teve grande participação nas reivindicações sociais voltadas para o campo na década de 1980.



Foi em 1984, que o MST foi formalmente criado, no Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, realizado na cidade de Cascavel, Paraná. Este Movimento Social surge em um contexto de mobilizações sociais, das quais participaram ativamente o Movimento das Mulheres, dos Sindicalistas, das Associações de Bairro, dos Funcionários Públicos, dos Índios e dos Negros (Borges, 2012). A apropriação capitalista da terra foi o que motivou as lutas sociais do MST pela Reforma Agrária no Brasil.

Nos anos 80 e início dos anos 90, período que foi marcado pela redemocratização do país, os movimentos sociais reivindicavam um projeto novo de sociedade. Existia uma grande pressão popular, principalmente pelas lutas dos Movimentos Sociais e pela atuação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Movimento Eclesial de Base (MEB) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT), que mobilizou a sociedade civil para enfrentar a ditadura militar. Neste “processo de resistência à ditadura militar, e mais efetivamente a partir de meados da década de 1980, as organizações da sociedade civil, especialmente as ligadas à educação popular, incluíram a educação do campo na pauta dos temas estratégicos para a redemocratização do país” (Brasil, 2007, p. 11).

Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal (CF) com “a garantia da educação como direito de todos e dever do Estado, também a educação dos povos e populações do campo encontram espaço legal para ser reivindicada como direito, fundamentado na condição básica de cidadania de seus sujeitos” (Moreira: Menezes, 2014, p. 41). Ressaltamos que a luta reivindicando uma educação escolar para os povos do campo já estava contemplada, mas não com suas especificidades, já que a concepção de educação abordada no texto legal era abstrata e não dava conta dos diferentes contextos nos quais pretendia ser ofertada.

Os acontecimentos da década de 1990 e dos anos 2000 são essenciais para compreendermos os aspectos iniciais do projeto de Educação do Campo, por meio de manifestações e propostas que ampliaram o espaço e debate das diferentes populações camponesas. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Básica estabelece a Educação do Campo como uma modalidade específica de educação, à qual devem ser respeitadas as especificidades e o calendário escolar adapta-se com as particularidades da vida nos territórios camponeses e de cada região. Esta seria um marco legal que influenciaria as políticas de educação para os povos do campo.



Na busca pela garantia de suas epistemologias, os povos do campo marcaram território nas políticas educacionais, por meio da Articulação Nacional Por Uma Educação Básica do Campo, sediada em Brasília. Um marco deste período aconteceu em 1997 foi o Primeiro Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (I ENERA), articulado com o MST, o Fundo das Nações Unidas Para a Infância (Unicef), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Universidade de Brasília (UnB), entre outros (Borges, 2012), que representa o surgimento do Movimento Por uma Educação do Campo. A partir daí, inicia-se um diálogo entre o Estado e a sociedade civil, então, acontece o reconhecimento das diferenças socioculturais e das necessidades de reconstrução do projeto político pedagógico para as escolas do território rural, por parte do Estado.

Em 2002, devido a essas mobilizações é construída a primeira Legislação Educacional para Educação Básica das escolas do território campestre. A Resolução CNE/CEB nº 36/2002, que instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das escolas do campo, que direciona um projeto de educação para as escolas campestres pautado no desenvolvimento sustentável dos povos do campo. No entanto, essa Legislação não assegura a valorização dos saberes campestres na produção do conhecimento, os saberes urbanocêntricos continuam sendo referência para o processo de produção epistêmica.

Em 2004, aconteceu a Segunda Conferência Nacional “Por Uma Educação do Campo”, que permeou discussões sobre as complexidades da Educação do Campo, como também, a colaboração de novos parceiros nos debates sobre esta modalidade educacional. Através da intensificação das lutas sociais aconteceu nessa ocasião a criação da SECAAd (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade). Por meio destas mobilizações nacionais, o território campestre passa a ser visto como um lugar que estabelece relações sociais, econômicas, políticas e educacionais diferentes ao que se refere ao território urbano. Então, segundo Fernandes e Molina (2004) “esse paradigma rompe com o paradigma da Educação Rural, que tem como referência o produtivismo, ou seja, o campo somente como lugar da produção de mercadorias e não como espaço de vida” (p. 10).

Assim, compreendemos que o Paradigma da Educação do Campo é considerado como um Paradigma que esteve voltado até a década de 1950 na denúncia da Educação Rural e que, a partir da década de 1960, aumentou as manifestações que reivindicavam



uma educação específica e diferenciada para os povos do território campesino. Salienciamos, principalmente, a contribuição do MST nas manifestações contra hegemônicas que impulsionaram a construção do Paradigma da Educação do Campo.

Conclusão

Compreendemos que a Educação do Campo no Brasil está ligada ao mundo do trabalho, da cultura, da produção, também associada à luta pela terra, ao projeto popular de desenvolvimento para o campo. Um projeto de educação que reconhece os saberes e os fazeres dos povos do campo como forma válida de produção de conhecimentos, pautado no Paradigma da Educação do Campo que está relacionado com as vivências outras dos povos campesinos que lutaram/lutam para conquistar seus direitos por uma educação específica e diferenciada.

Concluimos que a princípio a educação ofertada no território campesino era pautada no modelo urbanocêntrico, foi a partir de muitas reivindicações, lutas dos Movimentos Sociais e articulações como a Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, entre outras, que os campesinos passaram a ter espaço nas políticas educacionais do país.

Notas

¹ Universidade Federal de Pernambuco-CAA/Brasil

² Universidade Federal de Pernambuco-CAA/Brasil

Referências

Arroyo, M. G. A (2009) Educação Básica e o Movimento Social do Campo. In: Arroyo, M. G.; Caldart, R. S.; Molina, M. C. (Org.). Por uma educação do Campo. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes.

Caldart, R. S. (2002) Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. In: Kolling, E. J.; Cerioli, P. R.; Caldart, R. S. (Org.). Por uma educação do Campo. Brasília, DF: Articulação Nacional por Uma Educação do Campo. Coleção Por Uma Educação do Campo, n.º 4.

Caldart, Roseli Salete (2004). A escola do campo em movimento. In: Arroyo, M. G.; Caldart, R.; Molina, Mônica Castagna. (Org.). Por uma educação do campo. Petrópolis, RJ: Vozes.

Caldart, Roseli Salete. (2009) A escola do Campo em Movimento. In: Arroyo, M. G.; Caldart, R. S.; Molina, M. C. (Org.). Por uma educação do Campo. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes.



Borges, Heloísa da Silva. (2012) Educação do Campo como processo de luta por uma sociedade justa. In: Ghedin, Evandro (Org.). Educação do campo: epistemologia e práticas. São Paulo: Cortez.

Brasil. Parecer CNE/CEB Nº. 23, de 12 de Setembro de 2007. (Consulta referente às orientações para o atendimento da Educação do Campo). 292

Brasil. Resolução CNE/CEB Nº. 1, de 3 de Abril de 2002. (Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo).

Costa, L. G. A. (2012) Educação do Campo em uma perspectiva da educação popular. In: Ghedin, Evandro (Org.). Educação do campo: epistemologia e práticas. São Paulo: Cortez.

Freire, Paulo. (2012) Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

Ghedin, Evandro. Professor reflexivo: da alienação da técnica à autonomia da crítica. In: Pimenta, Selma Garrido; Ghedin, Evandro (orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 7. ed. São Paulo: Cortez.

Lemos, G. T. (2013) Os saberes dos povos camponeses tratados nas práticas curriculares de escolas localizadas no território rural de Caruaru-PE. 2013. 185f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Centro de Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

Paiva, Vanilda. (2003) História da Educação Popular no Brasil: educação popular e educação de adultos. 6. ed. São Paulo: Loyola.

Silva, f. G. P. (2015) Os paradigmas que alicerçam os livros didáticos de história e geografia da coleção didática projeto buriti multidisciplinar: um olhar através das epistemologias do sul. (Dissertação de Mestrado em Educação), Caruaru.

Quijano, Anibal. (2005) Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. In: Lander, E. (Org.). A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e Ciências Sociais. 3. ed. Buenos Aires: CLACSO, p. 227-278.



Línea Temática 2.

**Movimientos sociales, construcción
y defensa de la ciudadanía, los
derechos humanos y lo común**



Las redes ciudadanas territoriales: Movimientos de inclusión y control al manejo público: Un caso del trabajo en red de las OSC en Guayaquil.

Javier Gutiérrez Enríquez

Resumen

En el territorio, como espacio de relaciones sociales entre actores, instituciones y ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se expresan a través de un complejo accionar en el que se articulan varias dimensiones de intervención social; fundamentalmente es el marco de los procesos de incidencia en las políticas públicas (la actuación en los espacios públicos o en el terreno de los programas sociales gubernamentales), el escenario (entre otros) en el que promueven los cambios sociales. Bajo esta perspectiva de análisis, las OSC ejercen roles que conducen la realización de prácticas de incidencia en las políticas públicas, control social a través de observatorios ciudadanos, de veedurías o de audiencias públicas de rendición de cuentas de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, el tradicional accionar de la sociedad civil organizada del Ecuador, por diversos motivos, se ha debilitado (o muestra de una manera diferente su intervención), priorizando sus necesidades de sobrevivencia y de acceso a recursos. Las OSC, en este marco, han perdido terreno en los espacios de incidencia, decisión colectiva o control social en la búsqueda de un sistema gubernamental eficiente y transparente.

Con este antecedente, la organización de cooperación al desarrollo, Misión Alianza Noruega en Ecuador, propuso la articulación de un movimiento de organizaciones que lleven adelante la iniciativa de trabajo colaborativo “La Red de OSC del Noroeste de Guayaquil”. La presente ponencia pondrá a consideración de los participantes el análisis de la experiencia de un trabajo desde “lo social” en un territorio, excluido socialmente, con miras a conducir las iniciativas, propuestas, acciones y manifestaciones (propias del ámbito de las relaciones sociales) de las OSC, hacia oportunidades reales de contar con oportunidades de cambio social e inclusión territorial.

Palabras clave

Sociedad civil; Control social; Nuevos movimientos sociales; Redes ciudadanas.

Introducción

Las redes territoriales, como expresión de un movimiento entre varios actores sociales e institucionales que buscan generar y sostener procesos de cambio de la realidad social



y de los procesos de ejecución de las políticas públicas en un territorio determinado, son experiencias de reciente aparición en Ecuador. Tanto en áreas urbanas como rurales, el país presenta amplias extensiones de territorios con población que enfrenta la inexistencia de sus más mínimos derechos a los servicios básicos (como salud, educación, movilización, seguridad, etc.). En este marco, la ONG de cooperación al desarrollo Misión Alianza de Noruega (la Misión) inició sus actividades, en Ecuador, en el año 1994 en zonas de alta vulnerabilidad social de la ciudad de Guayaquil como una organización diaconal que acompaña a las organizaciones locales en su proceso de identificación de las causas de su problemática, la búsqueda de formas de solución y de ejecución de acciones que les permitan consolidar una vida mejor en lo individual y en lo comunitario. La Misión reconoce que pobreza significa no solamente “carecer” de recursos o enfrentar el desempleo. Pobreza es una situación que responde a varios factores y dimensiones relacionadas con la falta de cumplimiento de los derechos de las poblaciones; es también la ausencia de oportunidades, de representación y de libertad, así como la existencia de relaciones fragmentadas con el medio ambiente.

Esta perspectiva integral para entender con nuevos enfoques la problemática de la pobreza, responde a una situación en la que se evidencian nuevos roles, responsabilidades y funciones de los diferentes actores (especialmente gubernamentales y de la sociedad civil organizada u OSC). Con respecto a la dinámica de la cooperación al desarrollo, una nueva perspectiva para analizar y enfrentar la pobreza ha llevado a algunos actores de cooperación externa que trabajan en el Ecuador a la decisión de incluir nuevos ejes de trabajo (gestión de riesgos, violencia intrafamiliar, cambio climático, participación ciudadana, etc.) y a cambiar sus modalidades de intervención (por ejemplo, de ser una institución ejecutora directa de proyectos a ser una entidad cooperante de apoyo a la movilización de redes de OSC, de ciudadanos y de incidencia pública).

Para alcanzar su objetivo, La Misión ejecuta con financiamiento de Misión Alianza de Noruega y NORAD el proyecto denominado “Desarrollo Comunitario” (DECO), el mismo que se realiza en las siguientes zonas del noroeste de Guayaquil (la zona con el mayor índice de pobreza extrema en la ciudad): Isla Trinitaria, Paraíso de la Flor y San Francisco; las tres zonas están conformadas principalmente por población migrante proveniente de diferentes provincias del país, siendo zonas multiétnicas, de población empobrecida, basadas en economías de sobrevivencia. Su población alcanza los 450 mil habitantes. Para el quinquenio 2016-2020 la Misión identificó este territorio como



prioridad de intervención, por el incremento de los niveles de pobreza y ser considerada zona de alta vulnerabilidad frente a los desastres ambientales.

Las diferentes estrategias y acciones del proyecto buscan contribuir a cambiar las normas sociales, reducir el estigma y la discriminación en la ciudad, mejorar la participación comunitaria y movilización de recursos, y aumentar el compromiso de las y los líderes de organizaciones sociales y comunitarias, iglesias, instituciones educativas y de salud, y organismos gubernamentales locales, para abordar las profundas desigualdades económicas y de género presentes en estas comunidades y que aumentan el riesgo, la vulnerabilidad y el impacto de las epidemias. Todo esto a través del accionar articulado del movimiento social y la articulación multi actores, poniendo énfasis en la activación de una red territorial a la que se denominó “La Red de OSC del Noroeste de Guayaquil”.

Fundamentación del problema

En una ciudad eminentemente comercial, principal polo de desarrollo del Ecuador, con uno de los más grandes puertos marítimos del Pacífico Sur pero con grandes y radicales contrastes sociales (pobreza-riqueza) ¿Cómo lograr un tejido social que integre a la diversidad de actores sociales con miras a construir en el Noroeste de la ciudad (caracterizado por la exclusión, la pobreza, la violencia y la casi ausencia de servicios humanos básicos) un territorio con mayores niveles de inclusión y articulación en el marco de la lógica del desarrollo urbano? Ante la debilidad del Estado y la carencia de recursos públicos para sostener procesos integrales y sostenidos de cambio y desarrollo social, ¿cómo convertir a la sociedad civil en un promotor de la articulación interinstitucional para promover la democracia en este territorio, la garantía de derechos y el desarrollo social?

La ciudad Santiago de Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del Ecuador, tiene estimación de 2.789.229 habitantes al 2019. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Guayaquil es una de las ciudades con las mayores tasas de desempleo en el Ecuador y con los mayores porcentajes de población viviendo en extrema pobreza en territorios casi “cercados” y encerrados en su propio círculo de pobreza. A decir de Gisela Heffes *..la disposición territorial de los guetos, impuesta en la Edad Media a través de una “geografía de la represión”, reaparece en esta configuración urbana de manera similar. Confinados al territorio de la villa (gueto), sus habitantes solo abandonan este espacio con el objeto de llevar a cabo sus “negocios” y bajo la condición implícita de regresar más tarde.*



A pesar de que el período 2008 a 2014 la ciudad muestra un avance en indicadores de desarrollo social y que permanentemente llegan personas de diferentes cantones y provincias en búsqueda de mejores condiciones de vida, no es menos cierto que en Guayaquil existen sectores donde las necesidades básicas no son cubiertas en lo más mínimo (especialmente en el territorio del noroeste), mostrando desigualdades territoriales en los logros del desarrollo, como también el grado de desprotección social en la que se encuentran los ciudadanos. La pobreza extrema y la inequidad social son, en esta medida, las principales problemáticas que debe enfrentar la ciudad en los próximos años, si se desea tener una mejor integración de la sociedad, una disminución de la violencia y una mejor condición de gobernabilidad entre sus instituciones.

Trabajar en el desarrollo de la sociedad es un imperativo para la Misión, que busca en sus proyectos la integración de las diferentes organizaciones comunitarias dentro de la localidad donde se ejecutan, fortalecer la organización y movilización en pro de sus derechos y el rescate del valor del ser humano. En sus diferentes líneas temáticas busca servir al desarrollo de niños y niñas en el contexto integral y de protección que demandan de la sociedad. Una vez concluido el proyecto en el año 2015, las diferentes evaluaciones y estudio de línea de base, determinaron la necesidad de continuar trabajando por un territorio más justo y generar movilización ciudadana frente a la situación social (convulsionada por las diferentes y complejas problemáticas, en el ámbito social, cultural y espiritual del ser humano).

Para la preparación del proyecto de la red, se ha seguido un proceso participativo y de investigación con diferentes actores sociales involucrados, sobre los logros y los nuevos retos que se presentarán en el futuro, además de las nuevas estrategias de intervención relacionadas a cada línea temática, a la optimización de los recursos económicos y humanos; así como del alcance de las metas y resultados propuestos. Así, en términos generales, el proceso ha seguido las siguientes etapas:

- A. *Análisis de los resultados de las evaluaciones de medio término y final del proyecto finalizado.*
- B. *Resultados del trabajo con grupos focales de los intervinientes en el proyecto, opiniones de encuestas y talleres realizados.*
- C. *Análisis de fuentes secundarias, sobre el contexto socio político local.*
- D. *Acercamiento a otras organizaciones que trabajan en el territorio, con posibilidades de articulación a la red.*



El propósito de base de la iniciativa es lograr movilizar personas y actores sociales en torno a la importancia de cuidar a la niñez, adolescencia y juventud; valorar a la mujer en su integralidad y cuidar del contexto ambiental en beneficio de un mejor vivir; alcanzar una mejor calidad de vida contando con la articulación de las familias, las organizaciones sociales y las instituciones, para incidir en las políticas públicas que deben garantizar los derechos a una vida digna

Área geográfica

La Misión, desde sus inicios, ha contribuido en el mejoramiento de las condiciones de vida en el sector de la Isla Trinitaria (sur de la ciudad) y el sector Noroeste de Guayaquil. Actualmente la Isla Trinitaria ha alcanzado un mayor porcentaje de necesidades básicas satisfechas en comparación con otras comunidades; no obstante, la violencia, la baja calidad en la educación y las desigualdades de género siguen en un nivel insatisfecho. Por tal razón la propuesta planteó un periodo más (de 5 años) para abordar estos temas con estrategias de retiro de la intervención de la Misión en esta zona que comprende el énfasis en el trabajo de acompañamiento en las áreas salud, educación y desigualdades de género y la violencia intrafamiliar.

El sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, por su amplia extensión geográfica y su crecimiento poblacional, continuará siendo la zona de mayor concentración del proyecto DECO, especialmente en los nuevos asentamientos. Esta zona se dividirá por comunidades para un mayor alcance e impacto del proyecto.

El diagnóstico

Durante el año 2016 se efectuó un análisis de una nueva zona de intervención. Se identificó a la comunidad de San Francisco (también al noroeste de la ciudad) por las siguientes razones:

- Es una comunidad de 40 mil habitantes que está dentro del territorio de mayor vulnerabilidad social de Guayaquil (noroeste).
- Débil tejido social.
- Territorio excluido y en abandono, resultante de migraciones internas.
- Población sin garantía de sus derechos, con altos niveles de pobreza extrema, desempleo, violencia vulnerabilidad ambiental y falta absoluta de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y servicios de salud.



La propuesta

En Guayaquil interactúa un tejido de organizaciones de desarrollo y de la sociedad civil (OSC, iglesias de base, fundaciones, asociaciones comunitarias, etc.) que a lo largo del tiempo se ha consolidado en la ejecución de programas sociales en una diversidad de temas para el desarrollo. Estos tejidos de organizaciones tienen un relacionamiento directo con las familias en situación de pobreza, han desarrollado metodologías y han establecido vínculos con actores (incidencia política) gubernamentales en el marco de sus políticas públicas. Es decir, se evidencia un tejido social en el marco de la ciudad como tal.

Este acumulado de experiencias forma parte de un importante capital social que la Misión (en su rol de actor facilitador de procesos) quiso dirigirlo hacia el territorio del noroeste. Con sus características mencionadas, las organizaciones pueden llevar adelante programas y proyectos que se formulen y se ejecuten con el involucramiento y la participación activa de la ciudadanía, con metodologías que promuevan la inclusión territorial y la movilización de la población frente a las políticas gubernamentales. La sumatoria de estos elementos buscan:

- Incrementar el impacto de los proyectos,
- Un trabajo en red en el territorio (tejido social de OSC con participación ciudadana).
- Dinamizar a lo largo de los años un territorio con diversos actores sociales trabajando de manera colaborativa (bajo la teoría de la incidencia colaborativa) y enmarcados en los planes de desarrollo del país (nacional y local).
- Crear nuevas capacidades tanto para las organizaciones como un proceso de aprendizaje continuo.
- Entrar en alianzas con otros actores de la cooperación para promover la incidencia pública, con miras a lograr una mayor sostenibilidad en los proyectos de desarrollo.

Desde una perspectiva global, la articulación de estos actores fue vista como una oportunidad para facilitar un proceso colaborativo, de trabajo en red que contribuiría a crear un territorio de inclusión y de mayores oportunidades para superar la pobreza, en el que se articularían varios actores sociales (OSC, gobierno nacional/local, universidades, iglesias de base, organizaciones comunitarias, cooperación internacional, entre otros).



La dinámica de la gestión social

La nueva forma de gestión operativa se fundamentó en los siguientes principios:

- Consolidación de una mayor eficacia e impacto de programas y proyectos a través del trabajo en red y la consolidación de un tejido social para el desarrollo y superar la pobreza en el territorio.
- Fortalecimiento, mayor actividad y posicionamiento como organización diaconal.
- Presencia en espacios de decisión de políticas públicas.

La Misión transitó desde una perspectiva de “enfoque en el socio” a una modalidad de “incidencia colaborativa con OSC” en el desarrollo del territorio a través de la ejecución (conjunta) de proyectos con otras organizaciones con objetivos similares y el aprendizaje permanente. La modalidad utilizada fue la convocatoria, preselección y selección final de aproximadamente 25 a 30 organizaciones de desarrollo local (OSC, fundaciones, iglesias, asociaciones comunitarias, etc.) con las cuales se planificó (con fondos semilla y metodologías participativas) los distintos proyectos para que ejecuten programas en la zona del noroeste de Guayaquil.

En este marco, se acordaron los siguientes principios metodológicos para organizar el trabajo con las organizaciones que iniciaron a formar parte de la red:

Incidencia colaborativa

Es colaborativa porque identifica a la colaboración como una interacción fundamental para resolver los problemas sociales. En este sentido, la colaboración puede convivir en un marco de intereses y objetivos diversos, pero a los cuales se los puede articular. Es colaborativa ya que asume la necesidad de generar procesos sostenidos de interacción, diálogo y cooperación entre actores diversos con miras a generar cambios sustentables y de largo plazo en las condiciones de vida de una comunidad o un territorio; para lo cual promueve la articulación de todos los actores afectados por una situación problemática y genera movimientos orientados a empoderar a los actores más vulnerables. Para generar un proceso de incidencia colaborativa es necesaria la identificación de estrategias de trabajo conjunto y la elaboración de una planificación orientada a lograr los objetivos de cambio social.

A través de “mesas de trabajo” por cada tema, para hacer seguimiento a los avances de los proyectos de las OSC y establecer consensos y acuerdos con el gobierno local, otras



organizaciones, iglesias populares de base y representantes comunitarios (asociaciones de base).

- Ejecución (conjunta) de procesos: las organizaciones locales de desarrollo son las encargadas de llevar adelante los proyectos con los cuales la Misión busca generar impactos.
- Comunidades de aprendizaje: sistematización colectiva de las experiencias de trabajo de cada mesa y socialización a los principales actores sociales (municipio, gobierno central, otras OSC, comunidad eclesiástica, líderes de base, etc.)
- Organización de la zona geográfica: por comunidades territoriales (agrupación de bloques zonales)
- Articulación territorial:

OSC locales

Redes interinstitucionales

Redes específicas ya existentes (por temas: salud, educación, discapacidad, etc.).

- Rol de la Misión: proveer información y metodologías para la facilitación en la incidencia política
- Rol de la OSC local: implementar los proyectos para alcanzar metas y resultados de cambio social e incidencia política.
- Rol de las comunidades de base: defensa de sus derechos, participación activa en los procesos de incidencia política, portavoz de las necesidades, recursos, retos y fortalezas de su comunidad.
- Redes específicas: son aquellos representantes que por un mismo objetivo benefician como, por ejemplo: redes educativas, de mujeres, de movimiento eclesial o agrupaciones de grupos vulnerables, etc., estas organizaciones pueden de hecho o de derecho.

Reflexiones finales

Los territorios se configuran en base a los sujetos sociales que los componen siendo éstos una construcción social y política. El territorio del noroeste de Guayaquil manifiesta las características de una comunidad poblacional producto de los flujos migratorios internos (desde provincias cercanas de la costa y algunas de la sierra central hacia Guayaquil, en su mayor parte conformada por población campesino indígena, expulsada



de sus parcelas agrícolas); movimiento generado especialmente desde los años 90 del siglo anterior. Esta población se asentó en tierras que les fueron dadas bajo procesos de ilegalidad auspiciados a través de prácticas políticas clientelares y el apareamiento de grupos de traficantes de tierras, muchos de ellos protegidos por las autoridades de control. El territorio, en este marco, fue constituyéndose como un espacio de contradicciones. A decir de Émili Doré *“...la contradicción nos parece un elemento central para el entendimiento de las conductas de las poblaciones marginales. Si bien existe la posibilidad de un ascenso social, las oportunidades son restringidas y los éxitos frágiles. Los cambios sociales no se encadenan en una dinámica de desarrollo sustentable y ‘lo constante es la existencia de lo antagónico’. Es este antagonismo lo que la caracteriza. Los habitantes de estos barrios no son personas premodernas que tienen que evolucionar para insertarse en la ciudad moderna. Por el contrario, sus objetivos y su firme creencia en el progreso los coloca en el corazón del proceso de modernización que vive la nación. No obstante, sufren más que todos de la limitación de este proceso; son demasiado numerosos, porque son regiones enteras las que están excluidas del progreso y alimentan la migración.*

En este espacio territorial de contradicciones, donde habitan casi 450 mil habitantes en condiciones de marginación, exclusión y negación de sus derechos humanos, se planteó la generación de un amplio trabajo en red, con la participación de más de 20 OSC, 40 iglesias comunitarias de base, 4 universidades, 3 institutos superiores tecnológicos, agencias de cooperación externa, líderes comunitarios, representantes de base, representantes de las entidades públicas que intervienen en la zona, etc. Un trabajo en red denominado “Re del Noroeste” con miras a movilizar a la población y a los actores sociales en procesos de incidencia política, captación de recursos, inclusión a los procesos de desarrollo urbano y visibilidad del territorio.

Luego de tres años de ejecución de la iniciativa de la Red del Noroeste, se han articulado para colaborar OSC con la implementación de metodologías de desarrollo, iglesias de base, gobierno nacional, municipio y comunidad (familias y líderes comunitarios). Al ser el territorio del noroeste de Guayaquil una comunidad tradicionalmente abandonada por parte de los gobiernos y de las instituciones de desarrollo, lograr que instituciones, comunidades y OSC trabajen de manera articulada y en red para promover procesos de cambio social, es un movimiento que ha generado expectativa en la ciudad. Uno de los procesos que ha llamado la atención, es que las organizaciones de base cuentan con representación de la comunidad, participan en mayor número cada año (organizaciones



que son legítimas ante sus comunidades) y que movilizan sus proyectos para el desarrollo de sus zonas. La participación de la comunidad se manifiesta en las diferentes propuestas de involucramiento e integración social, como promotores comunitarios en salud preventiva y en la mejora de instalaciones de atención sanitaria. En las actividades de capacitación sobre los derechos de las mujeres y disminución de la violencia de género, se integra y articula la participación de hombres y mujeres de la comunidad.

El llamado del movimiento de la Red a romper con las contradicciones del territorio se traduce en un incremento en el número de instituciones y organizaciones aliadas para promover el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población del noroeste. Instituciones, trabajando de manera articulada, como el Consejo Cantonal de Derechos, el Ministerio de Justicia, empresas privadas, Universidad de Guayaquil, Universidad Politécnica Salesiana, Institutos tecnológicos, iglesias populares, redes de promotores comunitarios, redes de mujeres, redes de OSC, entre otros.

En el trabajo con la metodología de “incidencia colaborativa” para la superación de la exclusión territorial, es muy importante la creación de un grupo de organizaciones para que (entre todas) las OSC conozcan la actividad que realizan cada una. Por esta razón se creó (en 2016 y se fortaleció en el 2018) la “Red del Noroeste”, a través de la cual se han realizado encuentros, talleres, ferias, marchas públicas, diálogos abiertos con las autoridades e intercambio de experiencias. Estas actividades ayudan a mejorar la calidad del trabajo de las OSC y permiten que la población (las familias) participe en las diferentes acciones de los proyectos. La estrategia ha generado algunos aportes con el fin de construir una sociedad civil organizada, y estos aportes giran en torno a la participación ciudadana y garantía de derechos, organización comunitaria. Sin embargo, estos elementos son iniciales. La exclusión y la ausencia de derechos aún son más que evidentes en el territorio. Los procesos deben ser fortalecidos y abarcados en todos los proyectos, programas, planes e iniciativas de todos los actores sociales. En cuanto a los aportes de la estrategia para la construcción de una sociedad civil organizada en el territorio, se concluye que, si bien se realizan acciones para este fin, muchas de las OSC no evidencian acciones para la sostenibilidad de este proceso. Para fortalecer esta estrategia los actores se identifican alrededor de los siguientes elementos: planificación del futuro del territorio con permanente participación de los representantes comunitarios (que incluya la definición de objetivos de incidencia, indicadores sociales y elaboración de un plan que articule a las distintas zonas); articulación intersectorial (entre actores que se movilizan en torno a los derechos de la mujer, el ambiente, la niñez, la salud, el



economía popular, etc.); creación de estrategias mediáticas para posicionamiento de Red del Noroeste, así como una mayor y activa presencia en espacios de decisiones públicas como elemento fundamental del sentido de un movimiento social de trabajo en Red.

Referencias bibliográficas

Caravaca, Inmaculada y González, Gema, 2009, Las redes de colaboración como base del desarrollo territorial. 23-289. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales de la Universidad de Barcelona. Recuperado de: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-289.htm>

Centro de información y asesoría en salud. (2015). Incidencia colaborativa en las organizaciones sociales. Recuperado de: <https://bit.ly/35bYI2Q>

Doré, Emilie. (2008) La marginalidad urbana en su contexto: modernización truncada y conductas de los marginales. Sociológica. año 23, número 67, mayo-agosto de 2008, pp. 81-105.

Guerrero, Rafael. (2011). Guayaquil y la región: desarrollo territorial e inclusión social. Eutopia. Número 2 • octubre 2011 • págs. 55-77

Heffes, Gisela. (2012). Muerte y transfiguración de la ciudad: territorios urbanos y marginalidad. Cuadernos de literatura. nº32 ,113-152

Hermosilla, Jorge. (2014) Las redes territoriales, un fundamento del desarrollo. Levante. Recuperado de: <https://bit.ly/396vD4D>

Programa ALIAR (Aprendizaje y Liderazgo para la Incidencia en Argentina. (2016). Manual para la incidencia de la sociedad civil en políticas públicas.

Rafael Merinero (2009) Las redes de actores como elementos claves del desarrollo local. Aportaciones desde la sociología y la antropología del desarrollo. Gazeta de Antropología. Recuperado de:

http://www.ugr.es/~pwlac/G25_34Rafael_Merinero_Rodriguez.html



Movimentos Sociais e a luta pelo direito à cidade: A experiência extensionista com Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Eblin Joseph Farage
Sabrina dos Santos Dias
Karina Avelar da Silva

Resumo

A experiência extensionista realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares (NEPFE) da Universidade Federal Fluminense (UFF), junto com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), no Rio de Janeiro- Brasil, se caracteriza como experiência pioneira de trabalho social com famílias em processo de organização na luta pela moradia. O presente trabalho permite reflexões sobre o papel e a conceituação sobre movimento social hoje, a desigual configuração do espaço urbano e a luta pelo direito à cidade, a partir das determinações capitalistas, do desenvolvimento desigual e combinado do capital e a partir da década de 1990 no Brasil, das determinações da política neoliberal. A luta pelo direito à cidade e as respectivas dimensões aí representadas como o direito a moradia, a saúde, educação, cultura, lazer, trabalho etc, enfrentam a dimensão objetiva do capital e também a dimensão ideológica. Objetivamente a cidade não é construída para toda a população. Os/as trabalhadores/as, em especial os mais pauperizados, são induzidos a residirem em áreas periféricas das cidades, aonde os direitos sociais são ainda mais escassos. Ideologicamente, a luta pelo direito à cidade tem que enfrentar o pensamento conservador, traduzido em preconceito, discriminação, criminalização e mais recentemente, o ódio gerado pela extrema-direita, em especial a partir das últimas eleições presidenciais de 2019 no Brasil. O trabalho explicita também o papel social que a Universidade Pública pode e deve cumprir na luta pela garantia da cidadania da população mais pauperizada, através das ações extensionistas que levam a universidades aos espaços populares.

Palavras chave

Movimentos Sociais; MTST; Direito à Cidade; Extensão Universitária.

Introdução

O presente trabalho apresenta o debate sobre o direito à cidade a partir da experiência extensionista realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços



Populares (NEPFE), vinculado a Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), na cidade de Niterói, Rio de Janeiro.

A UFF é uma das maiores universidades federais do Brasil, com cerca de 50 mil alunos matriculados e inserida em nove municípios do estado do Rio de Janeiro. Marcada por se localizar em um estado com profundas desigualdades sociais e cercada por uma das maiores metrópoles do país, aonde as expressões da questão social se fazem sentir de forma latente.

Em uma realidade de profunda pobreza, especulação imobiliária, precárias políticas públicas voltadas para a urbanização da cidade e para a habitação popular, agravada pelo desemprego que assola o Brasil, a vida na cidade do Rio de Janeiro e em sua região metropolitana se torna, a cada dia, um desafio de resistência e de sobrevivência.

E nessa realidade que o projeto “questão urbana, movimentos sociais e serviço social: a luta pelo direito à cidade”, coordenado pelo NEPFE, teve início em 2014 através de uma parceria com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) do RJ.

O MTST (Movimento de Trabalhadores Sem-Teto) é um Movimento de atuação territorial que surge no final da década de 1990, iniciando sua trajetória pela busca por moradia digna, almejando desencadear um processo mais amplo de luta por uma nova cidade, contra a especulação imobiliária e o estado que a protege. Sua base social é composta por homens e mulheres trabalhadores; operários, informais, subempregados, desempregados, que, como mais de 50 milhões de brasileiros não tem sequer moradia digna. Vivem de aluguel, de favor ou moram em áreas de risco pelas periferias urbanas do Brasil.

No entanto, embora a bandeira central do movimento seja por moradia digna, entende-se que o trabalhador que não tem acesso ao direito de morar - o sem teto - também não tem acesso a educação, saneamento básico, aos atendimentos de saúde, ao transporte coletivo, à infraestrutura básica em seu bairro e a muitas outras necessidades básicas. Sendo a luta por moradia compreendida também como luta maior, por melhores condições de vida.

O objetivo desse projeto de extensão, que versa sobre o direito à cidade, tendo como mediação a luta pela moradia e a organização dos/as trabalhadores/as em movimentos sociais, é atualizar as ações desenvolvidas a partir da experiência junto aos MTST e as comunidades de São Gonçalo e Niterói. Assim, contribuir para o debate sobre Questão Urbana, direito à cidade e movimentos sociais urbanos no âmbito do Serviço Social e



ampliar as articulações com movimentos sociais, dando visibilidade e fortalecendo a organização coletiva dos/as trabalhadores/as residentes em espaços populares e favelas. Ratificar o papel social da Universidade Pública e a direção social do Serviço Social vinculado às demandas reais da classe trabalhadora, as expressões da questão social e ao tripé da Universidade Pública através da articulação entre ensino-pesquisa-extensão.

Os trabalhos extensionistas tem como eixo das ações o debate sobre a questão urbana com foco no direito a moradia e em todos os demais direitos inerentes a vida na cidade. Tendo como referência a organização coletiva dos/as trabalhadores/as do MTST a partir da premissa adotada é que as instituições públicas de ensino superior, como parte do sistema de políticas públicas conquistado pelos/as trabalhadores/as brasileiros/as, em especial a partir da Constituição Federal de 1988, têm como centro de sua atuação a garantia de direitos às parcelas mais pauperizadas da população, em especial àqueles segmentos da classe trabalhadora mais atingidos com a desigualdade inerente à sociabilidade do capital.

A partir da articulação entre os debates sobre o direito à cidade, o papel social da Universidade Pública e o protagonismo dos movimentos sociais na conquista de superação da subalternidade imposta pelo capital para estruturação de sua sociabilidade é que fazemos alguns apontamentos sobre nossa experiência extensionista.

A luta pelo direito à cidade

O capitalismo, como uma forma de organização das relações sociais, pressupõe não apenas uma maneira de produzir mercadorias, mas, sobretudo uma forma de organizar a vida social dos sujeitos, que vai desde o processo de estruturação social e territorial até a conformação de leis para a manutenção dos interesses inerentes à classe economicamente dominante, tendo como elemento central desse processo de organização e conformação social a dimensão ideológica.

Como afirmou Marx (2007), a classe que domina economicamente também domina política e ideologicamente, construindo relações sociais que conformam os seus interesses de classe e o desenvolvimento da produção capitalista. A dominação dos espaços e dos meios de produção pressupõe uma organização social e territorial que possibilite o desenvolvimento do processo produtivo em suas múltiplas dimensões. Nesse sentido, a segregação territorial urbana conforma espaços distintos de sociabilidade para os distintos segmentos de classe. As relações sociais no modo de



produção capitalista desenvolvem uma forma de produzir que privilegia a produção de valores de troca, ao mesmo tempo em que constitui uma determinada sociabilidade.

Como afirmam Yamamoto e Carvalho (1995), o capitalismo gera não apenas um modo de produzir, mas também um modo de pensar, que condiciona a vida dos sujeitos em todas as suas dimensões e não apenas no trabalho. Nessa perspectiva, a produção do urbano é permeada pelas dimensões objetivas e subjetivas que formam o ser social, expressas nas relações sociais de produção. Se é inegável que o urbano é fruto do desenvolvimento capitalista desigual, também como afirma Lefebvre (2001) o espaço urbano deve ser compreendido como condição essencial para o desenvolvimento capitalista industrial sendo ao mesmo tempo produto é produtor de sentidos. Como afirma o autor, “sentido e finalidade da industrialização, a sociedade urbana se forma enquanto se procura” (Lefebvre, 2001, p. 3).

Para expressar e expor a “problemática urbana”, impõe-se um ponto de partida: o processo de industrialização. Sem possibilidade de contestação, esse processo é, há um século e meio, o motor das transformações na sociedade. Se distinguirmos o indutor e o induzido, pode-se dizer que o processo de industrialização é indutor e que se pode contar entre os induzidos os problemas relativos ao crescimento e à planificação, as questões referentes à cidade e ao desenvolvimento da realidade urbana, sem omitir a crescente importância dos lazeres e das questões relativas à “cultura” (Ibid).

Partilhamos da análise de que a cidade é fruto da lógica do desenvolvimento capitalista desigual e combinado e que a sociedade é dividida em classes, tendo na propriedade privada o centro da manutenção do poder e da segregação social., compreende-se como importante para explicar a lógica cotidiana construída na favela o estudo das diferentes dimensões da vida cotidiana, como afirmou Martins (2009).

Para Silva e Barbosa (2005), as favelas são vistas como *espaço da ausência*, da precariedade e da falta de recursos. Nesse sentido passam a ser consideradas uma “cidade” à parte da cidade formal. Um espaço que se constitui com regras próprias, no qual o Estado não pode intervir. Considerada pelo *senso comum* como espaço da prostituição, da vagabundagem, da malandragem e da desordem, seus moradores acabam sendo colocados em uma posição de não-sujeitos e não-cidadãos.

Essa imagem construída histórica e culturalmente sobre as favelas cariocas, contribui para a reprodução de estigmas e estereótipos que acabam por afastar seus moradores das oportunidades, serviços e direitos que a cidade oferece aos seus habitantes. Como afirma Paulo Lins (2005, p. 15), no prefácio do livro “*Favela- alegria e dor na cidade*”, de



Silva e Barbosa (2005), “A favela sofre, ainda, os mesmos males e preconceitos presentes desde a época de seu aparecimento no jogo político de uma sociedade outrora escravista e, agora, racista e egoísta”

Para Lefebvre (2008), o espaço urbano como fruto do processo de industrialização está intrinsecamente ligado ao cotidiano, local em que se realizam as

Atividades prático-sociais, na medida em que elas se imbricam num espaço complexo, urbano e cotidiano, assegurando até certo ponto a reprodução das relações de produção (relações sociais). (Id, 2008, p.18).

É no urbano que se desenvolvem as relações sociais que dão sustentação ao modo de produção capitalista, por agregar em seu espaço as classes essenciais e as frações de classe que produzem as relações sociais. Nesse sentido, como afirma Lefebvre (2008), o direito à cidade constitui uma unidade espaço-temporal, que não elimina as classes, mas ao contrário, torna-se o espaço privilegiado de seu confronto e da evidência de suas contradições.

Segundo Villaça (2001), entende-se que a produção do espaço urbano e sua segregação - no que se refere à ocupação territorial por parte dos moradores da cidade e o desenvolvimento de infraestrutura - seguem as determinações e as necessidades da classe economicamente dominante.

Nossa tese é a de que, para as metrópoles brasileiras – e quase certamente também para as latino-americanas -, a força mais poderosa (mas não única) agindo sobre a estruturação do espaço intra-urbano tem origem na luta de classes pela apropriação diferenciada das vantagens e desvantagens do espaço construído e na segregação espacial dela resultante. (Ibid, p. 45)

Para Villaça (2001), a segregação é produzida como forma de dominação desigual do espaço urbano, fazendo dos territórios intra-urbanos, o reflexo da desigual conformação das classes sociais. A segregação na cidade produz tanto o desenvolvimento e a apropriação desiguais do território, como dos seus recursos, fazendo com que a cidade se constitua de espaços, locais e equipamentos que ratificam e evidenciam as desigualdades econômicas e sociais. Nesse sentido, a cidade não se constitui como fruto de um processo natural de desenvolvimento industrial e urbano, mas sim como fruto das necessidades do desenvolvimento capitalista.

A cidade que, desde a sua gênese, abriga segmentos populacionais distintos como forma de permitir a produção e a reprodução da sociedade industrial urbana, ao gerar



territórios profundamente desiguais passa a conviver com o conflito gerado pelos antagonismos das classes. Como afirma Lefebvre (2008, p. 86), “Notadamente, a segregação, a constituição de espaços periféricos e pobres permitindo a reprodução das relações de produção (que são relações de classe), essa segregação constitui uma negação teórica e prática do urbano, mas enquanto tal, ele o revela”.

A contradição entre a produção social da riqueza e sua apropriação privada se expressa de forma enfática na conformação do espaço urbano. Segundo Villaça (2001, p. 46), “a segregação é uma determinada geografia, produzida pela classe dominante, e por meio da qual essa classe exerce sua dominação – através do espaço urbano”.

Espaço que para Lefebvre (2008), está ligado a interesses díspares de grupos distintos que encontram unidade no Estado, para o autor, “sendo lugar e meio da prática social na sociedade neocapitalista (isto é, da reprodução das relações de produção), assinala os seus limites” (Ibid, p. 54).

Como ressalta Kowarick (1993), tradicionalmente as favelas se apresentam como a forma mais viável de sobrevivência de parcelas da classe trabalhadora, por representarem economia no que se refere aos gastos habitacionais e de transporte já que, em sua maioria, elas se encontram localizadas próximas aos centros de emprego. Nesse sentido, entendemos que os moradores das favelas se caracterizam como um segmento da classe trabalhadora contemporânea, produzida pela dinâmica de desenvolvimento e crescimento das cidades, como consequência do desenvolvimento capitalista. Como afirmou Marx (2007, p. 246) “*a produção não somente produz um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto*”. É nessa perspectiva que compreendemos a constituição das favelas, como inerentes e necessários ao capital.

Compreende-se que as favelas cariocas, assim como todo o tecido urbano, sofrem os impactos gerados pelas transformações societárias e pelas relações sociais. Transformações que alguns autores caracterizam como metamorfoses do capitalismo e do mundo do trabalho (Antunes, 2007; Teixeira, 2008; Castels, 2008), impondo aos estudiosos das expressões da questão social um olhar mais atento aos impactos na composição, organização e transformação da classe trabalhadora, que acabam por gerar, não apenas uma forma de organização da vida material, mas também uma nova forma de organização e produção da vida espiritual, subjetiva e social.

A compreensão sobre a constituição do espaço urbano requer a análise, mesmo que de forma breve, dos diferentes fatores que influíram em sua formação. A cidade, como



consequência do desenvolvimento capitalista e industrial brasileiro, tem como agente central de seu processo de conformação o poder público, direcionado pela condução hegemônica do Estado.

A secundarização da participação do Estado nas análises sobre a conformação do espaço urbano em parte se justificam pela obscurência do processo de formação social brasileira. Este se caracteriza, segundo autores como Fernandes (1975; 1981) e Ianni (2004), por um desenvolvimento capitalista dependente. O desenvolvimento dependente, analisado por esses autores, tem por base o processo tardio de industrialização como consequência do lugar que o país ocupava na divisão internacional do trabalho como exportador de produtos agrícolas e importador de produtos manufaturados.

O desenvolvimento dependente do Brasil está intrinsecamente vinculado à “*Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado*” da sociedade, que segundo Novack (1988, p. 09), se refere “às distintas proporções no crescimento da vida social [...] à correlação concreta destes fatores desigualmente desenvolvidos no processo histórico”, o que acaba por gerar a condição de país subdesenvolvido.

A trajetória rural brasileira foi perpassada pelo desenvolvimento industrial e pelo processo de mecanização do campo, provocando a necessidade de uma nova reconfiguração do local de moradia e centralização da classe trabalhadora. Se a demanda por força de trabalho cresce predominantemente longe da área rural, então se começa a viver um incremento dos espaços de moradia longe do campo, ou seja, nas cidades ainda em seu estágio incipiente. A industrialização traz consigo a necessidade de conformação da classe trabalhadora a uma nova forma de produzir e reproduzir a vida cotidiana, que passa pela organização do trabalho pela organização do tempo livre do trabalhador e pelo controle das diferentes esferas de sua sociabilidade.

Compreender o papel central que o processo de urbanização tem para impulsionar o processo de industrialização é fundamental para dimensionar a função que os diferentes segmentos de classe ocupam na produção e reprodução da vida material e social no capitalismo. Como afirma Villaça (2001, p. 23):

Tanto para o exercício imediato do trabalho como para a reprodução da força de trabalho, a localização urbana é determinada então por dois atributos. São eles:

- uma rede de infraestrutura: vias, redes de água, esgotos, pavimentação, energia;



- possibilidades de transporte de produtos de um ponto a outro, de deslocamento de pessoas e de comunicação.

A indústria não sobrevive sem trabalhadores, não se desenvolve sem avanço tecnológico, nem se mantém sem infraestrutura urbana que permita a chegada das matérias primas, o acesso dos trabalhadores e o escoamento da produção. A montagem das indústrias acaba por exercer um movimento de atração da população demandando a urbanização, o que pressupõe a criação de serviços públicos, infraestrutura viária, saneamento, edificação, comércio etc.

A estruturação do espaço intra urbano é dominada pelo deslocamento do ser humano, enquanto portador da mercadoria força de trabalho ou enquanto consumidor [mais do que pelo deslocamento das mercadorias em geral ou do capital constante], (VILLAÇA, 2001, p. 21).

Compreende-se a produção do espaço urbano, como afirmam Lefebvre (2008) e Villaça (2001), como produto e ao mesmo tempo produtor do processo de industrialização. No entorno da necessidade de produzir mercadorias, desenvolve-se uma complexa teia urbana, que envolve infraestrutura, saneamento, meios de comunicação e transporte, moradia, organização política e social, lazer, cultura etc. A intensidade com que essas dimensões da vida social vão ser desenvolvidas vai depender, em certa medida, da classe social a qual se destina. Identifica-se que não existe um desenvolvimento urbano ou intra-urbano igualitário, já que a cidade não é apropriada desta forma por todos os seus moradores. Compreende-se a constituição dos espaços das favelas como territórios intra-urbanos destinados à moradia de amplos segmentos da classe trabalhadora, desprovidos de condições materiais para ocupar espaços citadinos mais desenvolvidos ao que tange a infraestrutura, fazendo com que se alojem em espaços precarizados.

A experiência extensionista com o MTST

Anterior ao debate da experiência de extensão do NEPFE junto ao MTST é indispensável caracterizarmos não só o movimento, mas em que contexto histórico ele surge, e quais bandeiras de luta defende.

Marcado pelo avanço dos governos democráticos no Brasil, surge o MTST, a partir da necessidade de luta contra a especulação imobiliária, impulsionado pelo Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, verificada a necessidade de um movimento que atuasse em defesa da reforma urbana.



Um período em que a questão urbana conquista um aparato legal, fomentado pelas lutas por moradia digna e reforma urbana, que antecederam o período de abertura democrática no país. Em paralelo vemos a implantação de medidas neoliberais caracterizadas por um processo de privatizações e adequação às demandas de expansão do Capital. Essa relação implica numa política de ajuste fiscal e retração das políticas públicas, além disso, um cenário de desemprego e externalização da produção.

Das fileiras da sociedade mais afetadas no cenário supracitado e, que irão compor a base do MTST, temos os trabalhadores, que empregados ou não, vêem-se explorados cotidianamente, com jornadas de trabalho degradantes, residindo às periferias das grandes cidades, em condição de subemprego ou desemprego, recorrendo à informalidade ou vinculações temporárias, cada vez mais precarizadas.

São estes, os trabalhadores que compõem o movimento, trabalhadores urbanos, dos quais, operários, subempregados, trabalhadores informais, desempregados, temporários. Parte do universo de brasileiros sem acesso à moradia digna no país, nas palavras de Boulos (2014)

são todos aqueles que são afetados pelo problema da moradia, seja pela falta dela ou por morarem nas condições mais precárias. São aqueles trabalhadores a quem o capitalismo atacou de modo brutal, com suas armas mais afiadas: desemprego, baixos salários, trabalho informal, super-exploração". (Boulos, 2014, p.50).

O MTST apesar de lutar por moradia não é um movimento de moradia. A moradia é a bandeira central, mas não a única, pois não adianta apenas morar, mas deve-se morar com dignidade. Assim o movimento afirma que é uma luta por condição digna de vida. Sua proposta de Reforma Urbana apresenta uma transformação profunda na forma que as cidades são organizadas, devendo necessariamente passar pelo controle popular.

A dinâmica do movimento toma o trabalho de base, ou seja, a formação, mobilização e articulação com os trabalhadores, como imprescindível. Tem início em determinada localidade, onde a população é visivelmente afetada pelos impactos da especulação imobiliária e vive em condições de moradia muito precárias, sendo esta a realidade da maioria das periferias urbanas nos países de capitalismo periférico.

O trabalho desenvolvido está alçado na principal bandeira do movimento, a moradia digna, da qual se tem a compreensão, por parte dos integrantes, de que se estende à luta pela efetivação de um conjunto de direitos que comprometem a reprodução da vida social no espaço urbano como educação pública, saúde pública, transporte, emprego.



Entendendo que a maioria esmagadora dos trabalhadores não tem acesso a efetivação desses direitos, tornam-se pautas transversais na luta pelo acesso à moradia, assim sendo, o movimento se insere num contexto de luta pelo que Harvey (2014) denomina o “Direito à Cidade”, sendo a cidade mais um direito coletivo do que individual, ao qual o direito de mudar e reinventar o espaço depende, inevitavelmente, de um processo coletivo acerca da urbanização. (Harvey, 2014, p.28). Sendo a urbanização fundamental para o desenvolvimento do Capital a luta pelos direitos coletivos dos trabalhadores deve ser parte integrante na luta pela revolução urbana.

Para tal, concomitante ao trabalho de base, o movimento mapeia os latifúndios urbanos da região, privados ou públicos, a serviço da especulação imobiliária, não cumprindo o que se entende enquanto função social da terra urbana.

Localizado o território, o movimento inicia, informalmente, o contato com as lideranças comunitárias em geral, muitas delas que passaram a fundamentais articuladoras no processo de mobilização dos trabalhadores, fruto do trabalho de base desenvolvido nas assembleias organizadas pelo movimento. Avançada a mobilização e localizado o terreno ocioso, a ocupação da terra tem início.

Fundamental entender que a ocupação do terreno não é o objetivo principal do MTST. É atividade meio para “criar poder popular” (um dos lemas do movimento). Ao que pudemos experienciar através da extensão, a ser detalhado em seguida, foi que a dinâmica de organização nos terrenos pressupõe a construção de uma coletividade entre as famílias dos trabalhadores envolvidos, que se solidarizam enquanto classe na montagem dos barracos, divisão de tarefas cotidianas, como cozinhar, capinar, vigiar.

O processo de ocupação nem sempre será bem sucedido, quase sempre são respondidos com forte repressão e negociações com o poder público. Assim sendo, para fortalecer as ações do movimento todo esse processo se dá em conjunto com as reivindicações do movimento para construção de moradias dignas e populares.

Na luta por uma moradia digna, na construção de espaços coletivos e solidariedade entre os trabalhadores vemos os passos para a construção de uma nova sociedade. Impulsionados pela perspectiva de construção das lutas por moradia e demais mobilizações por ela colocadas o NEPFE inicia contato com o MTST na Ocupação Zumbi dos Palmares na cidade de São Gonçalo, RJ, e posteriormente na Ocupação 06 de abril de 2010 na cidade de Niterói, RJ, que configuraram as primeiras experiências



de ocupação do MTST no Estado do Rio de Janeiro, respectivamente nos anos de 2014 e 2015.

O objetivo da extensão é contribuir para o fortalecimento das lutas urbanas e conquistas de direitos. Busca ainda promover a inserção de discentes nos processos de mobilização da classe trabalhadora pela garantia de direitos, além de reverberar o compromisso ético do Serviço Social com os trabalhadores e fomentar o debate sobre a questão urbana e movimentos sociais.

A participação extensionista reafirma o papel da Universidade Pública na sociedade. Foram organizados grupos de estudos, palestras, seminários na temática da questão urbana e ações junto ao movimento, com discentes e docentes, envolvidos na extensão, alinhados ao Projeto Ético-Político do Serviço Social.

As(os) extensionistas envolvidos com as ocupações desenvolveram um conjunto de ações com o movimento. Dentre elas destacamos a articulação de uma rede de apoio, que proporcionou uma diversidade de atores sociais e políticos como partidos de esquerda, sindicatos, grupos culturais e religiosos junto ao MTST; aplicação de questionário social com os acampados, objetivando identificar as demandas sociais presente nas ocupações; realização de oficinas; plantões sociais e encaminhamentos para a rede socioassistencial do território.

Outro momento crucial junto ao movimento foi a participação mensal nas assembleias onde era possível a realização de atendimentos sociais com as famílias. De acordo com o artigo 4º da Lei 8.662 de 1993, que dispõe sobre as competências pertinentes ao assistente social, pudemos realizar ações com amparo legal, a saber:

III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;

V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;

Assim, para além de contribuir com o processo de articulação e mobilização dos trabalhadores, a abordagem do Serviço Social na perspectiva dos direitos, que alguns, até então, desconheciam, foi de fundamental crescimento para o movimento. Por outro lado, a importância do trabalho para os alunos possibilitou construir uma inserção popular que vislumbrou o horizonte profissional para além dos limites institucionalizados, ansiando trabalhar com as lutas sociais e articulação de agentes institucionais e comunitários.



A formação tem papel essencial para fortalecer a luta pelo direito à cidade. Extensões universitárias nestes espaços dão a formação profissional uma perspectiva única e fundamental, na medida em que aproxima os estudantes das lutas e processos organizativos da classe trabalhadora. Nessa relação, pode-se apreender a questão social a partir do viés da luta, assim como compreender o que significa de fato estar comprometido com a superação desta ordem societária. Marro (2014) salienta que a universidade pública pode contribuir para os movimentos de resistência da classe trabalhadora, de forma a orientar a produção intelectual para as necessidades desses movimentos, incidindo nos processos organizativos destes. Entretanto, pontua que, a experiência junto aos movimentos sociais propicia grandes aprendizados para a universidade e para o Serviço Social.

Reflexões finais

A superação da questão urbana ou o real direito à cidade – na integralidade da que isso significa – não são possíveis nos marcos do capitalismo. Esta sociedade produz as desigualdades, e cidades realmente igualitárias nesta ordem não são viáveis. No entanto, as lutas dos trabalhadores são essenciais, e qualquer conquista é fundamental. A cidade está em disputa, e os trabalhadores devem lutar por ela.

Tendo em vista que atualmente as cidades são gerenciadas como uma empresa pelos governantes, fornecendo lucro aos especuladores de terra e empreiteiros através da expulsão dos trabalhadores para as periferias, e a precariedade dos serviços públicos, o MTST propõe uma Reforma Urbana, pautada na defesa de uma transformação profunda no modo como as cidades estão organizadas.

Com isso, partindo do enfrentamento do déficit habitacional pretende elevar-se ao enfrentamento do déficit de cidade (Maricato, 2013), pois o drama crônico da sonegação do direito à moradia digna insere-se numa dinâmica urbana segregadora, perpassada pela “chibata” econômica da especulação fundiária e imobiliária, cujo resultado fundamental é a deterioração das condições básicas de vida de milhões de mulheres e homens.

A luta é o caminho de superação da subalternidade que os trabalhadores são colocados, é acima de tudo questionar o que está posto. Em tempos cada vez mais sombrios para a classe trabalhadora, de destruição de direitos e criminalização da pobreza, a luta e organização é imperativa. E é através da luta também que algum dia esta ordem societária poderá ser superada.



No processo, diga-se, fundamental, de endossamento das lutas, as universidades públicas podem ser parceiras poderosas. A aproximação da formação com as lutas sociais promove fortalecimento desses movimentos, bem como proporciona a esses futuros profissionais uma base na contramão da elitização histórica dessas instituições. No que tange a conquista das cidades, reforça-se ser inviável pensa-la na ordem do capital. Contudo, é imprescindível fortalecer as lutas dos trabalhadores ainda no capitalismo, assim como, buscar transformações na lógica de gestão das cidades

Bibliografia

Fernandes, Florestan. *A Revolução Burguesa no Brasil- ensaios de interpretação Sociológica*. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1975.

Iamamoto, Marilda Villela, Carvalho, Raul de. *Relações Sociais e Serviço Social no Brasil – Esboço de uma interpretação histórico metodológica*. São Paulo: Editora Cortez, 1995.

Ianni, Otávio. *Pensamento Social no Brasil*. São Paulo: Editora EDUSC, 2004.

Kowarick, Lúcio. *A Espoliação Urbana*. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1993.

Lefebvre, Henry. *O Direito à Cidade*. São Paulo: Editora Centauro, 2001.

_____. *Espaço e Política*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

Marx, Karl. *Contribuição à Crítica da Economia Política*. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2007.

Marro, K. I. O que a universidade pode aprender quando coloca seus pés em um acampamento sem terra? In: *Movimentos Sociais e Serviço Social: uma relação necessária*.

SP: Cortez, 2014.

Martins, José de Souza. *Fronteira - a degradação do outro nos confins do humano*. São Paulo: Editora Contexto, 2009.

Novack, George. *A Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado da Sociedade*. São Paulo, Editora Rabisco, 1988.

Silva, Jailson de Souza e BARBOSA, Jorge Luiz. *Favela- alegria e dor na cidade*. Rio de Janeiro: Editora Senac Rio, X Brasil, 2005.

Villaça, Flávio. *Espaço intra-urbano no Brasil*. São Paulo: Editora FAPESP, 2001.



De los sueños, hacia una agenda de ciudadanía juvenil. *La juventud santanera abre caminos de transformación social...*

Augusto César Rodríguez Maturana
Rodolfo Rodríguez Mendrales
Ingrid del Carmen Torres Barragan

“Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”.

Delors, 1996

Resumen

A partir del entendido que la intención formativa de la escuela se basa en un enfoque de enseñanza aprendizaje para la Comprensión y las Competencias, es decir, que el conocimiento no es un activo inmóvil sino que se construye a partir de las experiencias de los participantes y en la búsqueda activa de su propio aprendizaje, y bajo el lema Santa Ana, un sueño posible; cincuenta (50) estudiantes de la Institución Educativa Oficial de Santa Ana, ubicada en el corregimiento de Santa Ana (Isla de Barú), del Distrito de Cartagena, bajo la orientación de Directivos y Docentes, realizan en 2018 el Primer Foro Social Juvenil en esta comunidad. Este fue un espacio académico de reflexión democrática, en el marco del Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 y Ley 1885), en el que participaron más de cuatrocientos (400) jóvenes (14 a 28 años), quienes con el concurso de diferentes actores de la sociedad civil y la administración distrital construyen una Agenda de Ciudadanía Juvenil, que pretende proponer acciones de transformación de las realidades sociales, económicas, educativas, ambientales, políticas y culturales presentes en este territorio afrodescendiente; y logren así mejorar su calidad de vida.

La metodología “Diálogo democrático de saberes” implementada logra integrar diferentes estrategias que involucran tanto el contexto situacional como las necesidades de aprendizaje previamente identificadas y que se basan en los principios didácticos de enseñanza consistente en tres apartados: Aprender a Conocer, Aprender a Hacer y Aprender a Ser, incluyendo este último el aprender a Convivir

Palabras clave

Ciudadanía; Juvenil; Agenda; Aprendizaje.



Introducción

La juventud, es esa etapa en la que desde pequeños añoramos llegar y de adultos queremos regresar, pues, es aquel periodo de nuestras vidas donde los sueños son tantos, las esperanzas muchas y todo es posible, así lo evidenciaron los y las jóvenes de Santa Ana, Isla Barú, en el primer Foro Social Juvenil, una iniciativa liderada por estudiantes de la Institución Educativa de Santa Ana (IESA), en la cual tuvieron la oportunidad de reunirse en 10 mesas de trabajo con la institucionalidad del Distrito, organizaciones y grupos sociales del territorio, para conversar sobre las necesidades y problemáticas de su territorio, además proponer actividades con las autoridades pertinentes.

En concordancia con lo afirmado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el Documento 14: “los propósitos educativos de una sociedad siempre dependen de los contextos culturales e históricos que enmarcan su entorno, pero también de las relaciones sociales que configuran tal sociedad”. (MEN, 2010); y convencidos que la intención formativa de la escuela debe sentar sus bases en un enfoque de enseñanza aprendizaje para la Comprensión y las Competencias; en la Institución Educativa de Santa Ana, se propone, en el año 2018 el Foro Social Juvenil. Santa Ana, un sueño posible como un espacio académico de reflexión democrática de diferentes actores y sectores, sobre la realidad socioeconómica, política y cultural de la comunidad de Santa Ana; con miras a construir una agenda de ciudadanía juvenil de desarrollo común, que haga posible a las bases juveniles asumir grandes retos de transformación social.

Es preciso entender la comprensión como la habilidad para pensar y actuar, creativa y flexiblemente a partir de lo que sabemos, para resolver problemas, crear productos e interactuar con el mundo que nos rodea; es así como el Foro se constituye en un espacio pedagógico que permite el encuentro entre estudiantes, docentes, sociedad civil, entidades gubernamentales, y organizaciones no gubernamentales que hacen presencia en el territorio, para expresar sus reflexiones sobre líneas temáticas establecidas previamente (sostenibilidad y ambiente, seguridad y convivencia ciudadana, salud, educación (etnoeducación), infraestructura urbana y servicios públicos, economía familiar y sector productivo, turismo como oportunidad de desarrollo, cultura, recreación y deportes, estructura organizativa y comunitaria (desde la Ley 70 de 1993), identidad y territorio, política pública distrital de juventud y, rol y participación de las ONG en el territorio); en la que los participantes han ordenado su reflexión (preforos) y han podido madurar sus ideas por medio de la consulta guiada.



Desde la misión formadora de la Institución Educativa de Santa Ana y el liderazgo de la organización social juvenil; el Foro se convierte en una iniciativa ciudadana a presentar a los gobernantes y a la sociedad en general para fortalecer la gobernabilidad, la institucionalidad pública y la deliberación popular. Así mismo, el Foro Social Juvenil. Santa Ana, un sueño posible, en el marco del proceso formativo permitió que los jóvenes pudieran desarrollar, desde el conocimiento de la problemática de su contexto, habilidades para el debate, el diálogo y la confrontación de ideas. Eso significó la necesidad de propiciar estos espacios al interior de la Institución Educativa para que la experiencia del pensar sobre los temas cotidianos permita el desarrollo de su competencia dialógica, y nos acerque más a la tan anhelada educación de calidad, que al entender del Plan Decenal de Educación 2016-2026, “es aquella que propone y alcanza fines pertinentes para las personas y las comunidades en el contexto de una sociedad en continuo progreso y que la hace competitiva en el contexto mundial. Exige un sistema educativo en continuo mejoramiento y contribuye a la equidad, compensando las desventajas socioeconómicas para generar igualdad de oportunidades y lograr los resultados básicos socialmente deseables para todos” (MEN, 2017).

Contexto y Realidad

La Institución Educativa de Santa Ana (IESA) ubicada en el barrio el Paraíso del corregimiento de Santa Ana - Isla de Barú, perteneciente a la Localidad Histórica y del Caribe Norte en la Unidad Comunera Rural del Distrito de Cartagena departamento de Bolívar. Por las características del contexto la Institución Educativa de Santa Ana está focalizada como institución etnoeducativa, con única sede con una cobertura de 1120 estudiantes, oferta los niveles de Transición, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica y Media Técnica para el desarrollo de las especialidades del Nodo Turismo y Construcción articuladas con el SENA en: Auxiliar de Servicios de Arreglo de Habitación, Técnico en Cocina, Técnico en Mesa y Bar, Técnico en Construcción en Montaje de Instalaciones Eléctricas, Técnico en Construcción de Edificaciones.

Como principio pedagógico la institución propone al estudiante como principal actor del proceso académico quien desde su propia motivación, intencionalidad y compromiso se apropia de los saberes de manera significativa; la institución orienta su proyecto Educativo Institucional bajo el enfoque Social Activo Progresivo, teniendo como referentes teóricos a Vigotsky, Piaget, Ausubel, Brunner, José Martí y Miguel de Unamuno.



La población Santanera se encuentra estratificada en el nivel 1 presentando diversas necesidades básicas insatisfechas como inexistencia de alcantarillado público, un inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos, servicio de agua potable y energía deficiente, irregular servicio de transporte y conectividad; una precaria atención en salud; pocos espacios de esparcimiento, deporte y recreación que posibiliten el aprovechamiento del tiempo libre. Las actividades productivas de las familias están dirigidas a la pesca artesanal y la agricultura, sin embargo; un alto índice de la población se dedica a la comercialización de productos artesanales, alquiler de carpas, masajes, elaboración de trenzas, ventas de comidas y cócteles en Playas Blanca, siendo el turismo uno de los grandes potenciales productivos de esta comunidad.

Para abordar diversas situaciones socioculturales y económicas que obstaculizan el normal desarrollo de las actividades formativas con los estudiantes, docentes y directivos han adelantado una serie de iniciativas desde las diferentes áreas del plan de estudio, igualmente se han implementado proyectos de aula bajo la responsabilidad de algunos docentes, entre otros proyectos e intervenciones con la participación de instituciones públicas y privadas, relacionadas con las temáticas más relevantes.

Fundamentación teórica y pedagógica

La formación de la persona como preocupación central en la Institución Educativa de Santa Ana, determina que la orientación de sus acciones siempre estará dirigida hacia tres campos fundamentales: lo intelectual, lo moral y lo social. Estos campos, tienen algo en común y es que para desarrollar en los educandos autonomía se requiere un alto nivel de pensamiento que le permita entender diversos puntos de vista, y así lograr actuar en pro del bien común, mediante la formulación colectiva, ordenada y argumentada de propuestas para el desarrollo y la democracia en la comunidad de Santa Ana.

Si bien es cierto que un foro como el desarrollado, pone de manifiesto la posibilidad de interactuar en diversas las áreas del conocimiento, y las competencias requeridas para las personas del mundo de hoy; es posible afirmar que desde las ciencias sociales, en el ejercicio de las competencias ciudadanas, la enseñanza de la filosofía, surge como un ejercicio académico enmarcado en la pedagogía crítica, Paulo Freire (1997) “asumir la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo paradigma del ejercicio profesional del maestro”. Es decir, el maestro que desarrolla la pedagogía crítica considera el proceso educativo desde el contexto de la interacción comunicativa; como la posibilidad para identificar problemas, conocer diferentes propuestas frente a



tales problemáticas y en la búsqueda de alternativas de solución surgidas desde el nativo de Santa Ana, para tal fin los docentes orientarán el desarrollo del ejercicio, pero son los estudiantes quienes ejecutarán el desarrollo de este. (Ver Cuadro 1. Contenidos programáticos)

Desde los postulados de Freire, se reconoce al maestro como agente transformador y por ello, su práctica pedagógica implica el análisis de su quehacer como un acto reflexivo y de comprensión de las diversas realidades donde se dinamiza para actuar sobre ellas, como bien lo dice el autor “como profesor necesito moverme con claridad en mi práctica” (Freire, 1997, p.67).

En el desarrollo de la práctica pedagógica los maestros no limitamos nuestro actuar a un ejercicio transmisionista de conocimientos, por el contrario, somos orientadores que creamos ambientes de aprendizaje que posibilitan la construcción colectiva de nuevos saberes en los que participamos de manera junto con los estudiantes. En este sentido, Freire plantea que “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción” (Freire, 1997, p.47).

El autor afirma que “es en la inconclusión del ser, que se sabe como tal, donde se funda la educación como un proceso permanente” (Freire, 1997, p.57)., por ello, los maestros de manera continua necesitamos involucrarnos en procesos de formación que permitan la implementación de estrategias acordes a las realidades y necesidades de los estudiantes.

En este mismo sentido, necesitamos considerar la transformación permanente de nuestra práctica, por lo que Freire afirma que, “es pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer como se puede mejorar la próxima” (Freire, 1997, p.40). Esta transformación implica la deconstrucción de experiencias, que al revisarlas de manera crítica nos permiten reflexionar y proponer otras formas de abordar la práctica pedagógica.

Anexo 1: Cuadro 1

Freire propone un estilo de trabajo donde los docentes verifiquemos la realidad de nuestra práctica a través de encuentros entre pares, plantea que “al comprobar, nos volvemos capaces de intervenir en la realidad, tarea incomparablemente más compleja y generadora de nuevos saberes que la de simplemente adaptarnos a ella” (Freire, 1997, p.75). En este sentido, establecer un “diálogo igualitario”, se logra cuando cada sujeto



como interlocutor válido, comunica sus iniciativas y a través de una negociación conjunta se construyen las estrategias que permiten transformar su práctica.

Con relación al diálogo igualitario Freire, afirma, “Cambiar es difícil pero no imposible” (Freire, 1997, p.77), basado en este postulado, planteamos que con el trabajo con la comunidad educativa los maestros tenemos la oportunidad de renovar la práctica pedagógica, teniendo una actitud decidida para emprender la lucha frente a los discursos estáticos y tradicionalistas que aún están presentes en los contextos educativos. Una vez que los actores del proceso educativo emprendan el camino de la transformación será difícil que este se detenga.

Metodología

Frente al Desarrollo Territorial, la Desigualdad y la Descentralización, el Foro Social Juvenil: Santa Ana, un sueño posible; surge como un ejercicio democrático-formativo enmarcado en la pedagogía crítica de Paulo Freire, desde la perspectiva de “asumir la pedagogía crítica en el contexto de la educación pensada como un nuevo paradigma del ejercicio profesional del maestro”. En este sentido Vigotsky, hace referencia a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético o “línea natural del desarrollo” también llamado código cerrado, la cual está en función del aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente, es decir el aprendizaje está estrechamente relacionado con las relaciones establecidas por el ser humano y el medio, de tal manera que dicha variable puede modificar la manera de aprender.

Partiendo de los pilares de la Educación, sugeridos por Jaques Delors (1996), la metodología propuesta para el Foro busca integrar diferentes estrategias que involucran tanto el contexto situacional como las necesidades de aprendizaje de los jóvenes participantes previamente identificados y que se basan en los principios didácticos de enseñanza consistente en tres apartados: Aprender a Conocer, Aprender a Hacer y Aprender a Ser, incluyendo este último el aprender a Convivir. Así mismo, se basa en el aprendizaje cooperativo que, a diferencia del aprendizaje individualista, permite la construcción colectiva de identidad.

La metodología promueve el desarrollo comunitario en la medida en que incentiva la actividad mental constructiva de las personas como ser ontológico y parte activa del proceso de transformación, invitando al participante a “Aprender Haciendo” mediante la interacción y diálogo entre Ciudadanía Juvenil – Administración Distrital, en busca de logros comunes. Para ello, se conjugan saberes de conocimientos prácticos de los Jóvenes, el aprendizaje sobre el desarrollo personal, las estructuras organizativas, la



normatividad y modernización de las instituciones que funcionan en el distrito, sus roles, responsabilidades y forma de hacer efectivo el actuar de las organizaciones en su comunidad, analizando y construyendo herramientas que contribuyan al fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y capacidades para el actuar en su entorno socio-cultural y político.

En esta primera versión del Foro Social Juvenil de Santa Ana, acudieron a la cita más de 400 jóvenes entre 14 y 24 años, que tenían como propósito hacer posible la construcción de una agenda ciudadana que respondiera de manera pertinente a la realidad santanera y su vez se tuviera en cuenta la participación de la juventud de manera organizada, que meses anteriores al evento del foro social, se fueron informando e investigando sobre la situación de Santa Ana, de manera que pudieron tener las herramientas conceptuales y diagnóstica para sentarse y conversar con las institucionalidades de las mesas de trabajo, de esta manera con el apoyo de la Institución educativa de Santa Ana, este proceso hoy se ejecuta como un proyecto que activa la juventud en el corregimiento, en aras de seguir fortaleciendo los procesos de participación ciudadana en el marco de los derechos fundamentales. Por lo tanto, el sueño de la juventud santanera se convierte poco a poco en una realidad que transforma.

El primer Foro social juvenil se logró construir en 4 momentos claves, lo que permitieron que al final se tuviera una propuesta para una agenda ciudadana, en primer momento se le llamo Aprender a Ser, el cual se llevó a cabo al inicio del día, este consistió en el registro de los participantes, palabras de bienvenida del Rector de la Institución Educativa de Santa Ana, presentación del grupo juvenil – JOCFUS a cargo del joven líder Yefferson Rovira y Yair Gómez, además, se expusieron las muestras culturales de la Orquesta Musical de la IESA dirigida por Carlos Rafael Orozco y el grupo de danza y música Etelvina Maldonado dirigido por Rosady Diaz Zuñiga.

El segundo momento, Aprender a Conocer, en él se dieron las conferencias principales “¿El destino es mi dueño o soy dueño de mi destino?” a cargo de Julio Salvador Alandete Arroyo y “La importancia de hacer realidad nuestros sueños” por Elbert Torres Ahumado, estas conferencias se realizaron con el propósito de motivar a los y las jóvenes para luego en tercer momento llamado Aprender a Hacer, estos se propusieron la Construcción de Agenda Ciudadana, por medio de las Mesas Temáticas, la cual contó con siguiente metodología:



Momento de Aprender a hacer: se propicia la discusión y elaboración de propuestas: ¿esta situación puede cambiar? ¿De qué manera piensas que puede mejorar esta situación? (Sin dinero y sin apoyo)

Propuesta metodológica en las mesas de trabajo

Instalación

- A. Presentación del coordinador de la mesa y orientaciones generales de la metodología.
- B. Presentación de asistentes: elección de roles (vocero, secretario, moderador de tiempo, entre otros).

Definición del eje temático y diagnósticos de la comunidad.

Momento de Aprender a conocer: convalidación de la información ¿Cuál es el estado actual de este eje en la comunidad? ¿Qué opinas de la situación diagnóstica presentada en este aspecto? ¿Estás de acuerdo? Si o No ¿qué agregarías? Hacer uso de representaciones y/o cartografía social.

Momento de Aprender a hacer: se propicia la discusión y elaboración de propuestas:

¿esta situación puede cambiar? ¿De qué manera piensas que puede mejorar esta situación? (Sin dinero y sin apoyo)

Momento de Aprender a Ser: cada participante hace autorreflexión, el reconocimiento de valores y ejercer ciudadanía: ¿Cuál es tu aporte para mejorar esta situación?, ¿Qué expectativas desde la perspectiva del foro se tienen para mejorar el estado actual de este eje?

Momento de Aprender a convivir: Construcción colectiva de saberes ¿cómo puedo articular mi propuesta de solución con las de las entidades/jóvenes? Presentación de las instituciones participantes (cada entidad tiene entre 10 y 15 min.)

Socialización de la agenda: el vocero de cada mesa presentará ante la plenaria la agenda colectiva construida. Tener en cuenta que cada mesa unifica criterios para la presentación

Luego del debate en las mesas de trabajo sobre cómo estaba la situación en el corregimiento de Santa Ana, los estudiantes procedieron a generar ideas que hacían posible el cambio en su territorio, a partir de la definición de los recursos propios y entidades que pudiesen apoyar las actividades propuestas.



Resultados y Discusión

A nivel regional, la institución Educativa de Santa Ana se posiciona como ese espacio académico que gesta dinámicas de proyección social, que posibilitan la reflexión y análisis de las realidades del contexto, a partir del diálogo democrático de saberes que pone de manifiesto los intereses de cada uno de los agentes que interactúan en ella.

Nuestra escuela con la puesta en escena del Foro Social Juvenil, se resignifica como un ambiente de aprendizaje que más allá de brindar conocimientos, posibilita la transformación de realidades a partir de la creación de contextos de aprendizajes que signifiquen para nuestros estudiantes el desarrollo de competencias y habilidades de pensamientos que aportan a la reflexión, análisis y toma de decisiones. La IESA para el corregimiento de Santa Ana, Barú, es el espacio de formación más importante, en donde los niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de desarrollarse como seres humanos responsables y comprometidos para trabajar juntos por un mejor vivir.

El foro social juvenil en su primera versión, reunió a más de 400 jóvenes entre 14 y 24 años alrededor de una agenda académica que posibilitó la participación activa de cada uno de ellos y de esta manera convertirse en interlocutores activos durante los diálogos que sostuvieron con entidades gubernamentales y organizaciones que se encuentran en el territorio en busca de alternativas de solución a diversas problemáticas de la comunidad santanera. Los jóvenes fueron los protagonistas, se lo creyeron, lo sintieron y lo vivieron. Fueron sujetos activos en la comprensión de su realidad, de manera organizada, coherente y propositiva.

Como bien lo evoca el enfoque de enseñanza aprendizaje para la Comprensión y las Competencias, estos son procesos interdependientes, que de acuerdo a las experiencias de aprendizaje que se brinden, el sujeto es capaz de construir una representación organizada y coherente del aprendizaje, relacionándolo con sus experiencias y activando sus conocimientos previos, para construir nuevas comprensiones que le permitan adquirir habilidades para hacer frente a los retos cotidianos y plantear alternativas de solución a problemas reales, de una manera autónoma y creativa para transformar el mundo que lo rodea.

En este sentido, es de resaltar los encuentros pre-foro que se realizaron con los jóvenes y que estuvieron dinamizados por los maestros. Durante varios meses los jóvenes se reunieron en jornada extendida con dos propósitos uno de ellos para indagar, buscar información documental de su comunidad, consultar sobre las responsabilidades de las



entidades y organizaciones que tienen inherencia en el territorio. Y, por otro lado, para adquirir habilidades de pensamiento.

Con la puesta en marcha de esta gran práctica pedagógica el maestro necesariamente tuvo que asumir otra mirada del contexto que interviene, contemplar otras formas de encuentros académicos que posibiliten el desarrollo de competencias que contribuyen al aprender haciendo y que signifique para el estudiante un aprendizaje para la vida.

Anexo

ESTANDAR DE COMPETENCIA (Competencias asociadas)	COMPONENTE	OBJETIVOS	TEMATICAS
Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta relación	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Analizar las variables del medio ambiente que influyen directamente en el desarrollo de la población de Santa Ana	Medio ambiente, en Santa Ana
		Analizar los elementos dados al interior de la población, respecto al tema de sostenibilidad	Factores del medio ambiente influyentes en el desarrollo de la población Limitaciones de la población, en torno al tema de sostenibilidad
Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad.	RELACIONES SOCIALES E INTERRELACIONES	Reconocer los principios de cooperación dados al interior de la estructura organizativa dada en la población de Santa Ana.	Santa Ana y otros contextos Proyecciones de la población de Santa Ana
ESTANDAR DE COMPETENCIA (Competencias asociadas)	COMPONENTE	OBJETIVOS	TEMATICAS
Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación	ECONOMIA FAMILIAR Y SECTOR PRODUCTIVO	Analizar la funcionalidad y participación de los diferentes sectores productivos en el desarrollo de la economía de Santa Ana.	Los sectores productivos de Santa Ana y la influencia de los mismos en el desarrollo de la población
Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías.			
Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad.	CULTURA RECREACION Y DEPORTE	Describir el estado de la población de Santa Ana, respecto al cumplimiento del derecho a la recreación y la cultura.	Relaciones entre el deporte y el desarrollo sostenible de la región. Canales de recreación de Santa Ana y programas de deporte, recreación y cultura que se desarrollan en la población
ESTANDAR DE COMPETENCIA (Competencias asociadas)	COMPONENTE	OBJETIVOS	TEMATICAS
Valoro aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi entorno que promueven el desarrollo individual y comunitario.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMUNITARIA VISION DESDE LA LEY 70	Socializar la Estructura Organizativa y comunitaria desde la visión Ley 70 de 1993, en el contexto de Santa Ana.	Políticas y legislación respecto a poblaciones Afrocolombiana Aplicabilidad de políticas públicas en la población de Santa Ana Detalles de la ley 70 y sus mecanismos de aplicación en el contexto
Identifico organizaciones que resuelven las necesidades básicas (salud, educación, vivienda, servicios públicos, vías de comunicación...) en mi comunidad, en otras y en diferentes épocas y culturas; identifico su impacto sobre el desarrollo	ROL Y PARTICIPACION DE LAS ONG'S EN EL CONTEXTO	Conocer la incidencia y participación que tienen las ONG,S en el desarrollo de la comunidad de Santa Ana.	Las ONG`S u otras organizaciones que ejercen acciones en el contexto de Santa Ana, siguen un plan de acción tipificado, arrojado por la comunidad. Bajo qué criterios de inversión las ONG`S, ejercen algún tipo de acción en Santa Ana

ESTANDAR DE COMPETENCIA (Competencias asociadas)	COMPONENTE	OBJETIVOS	TEMATICAS
Identifico organizaciones que resuelven las necesidades básicas (salud, educación, vivienda, servicios públicos, vías de comunicación...) en mi comunidad, en otras y en diferentes épocas y culturas; identifico su impacto sobre el desarrollo.	SALUD	Conocer el programa de Salud que se ejecuta , alternativas de oferta y demanda que se tienen en la población de Santa Ana	¿Los programas de salud que se ejecutan en Santa Ana, son medidos bajo qué criterios? Los programas de atención en salud que se ofrecen en Santa Ana, atacan las problemáticas presentes en la población
		Revisar el tema de cobertura en educación en todos los sectores, niveles e indicadores de calidad. Identificar los alcances, debilidades que se presentan en la población de Santa Ana, respecto al tema educativo.	Los programas de educación ofrecidos para la comunidad de Santa Ana, resultan coherentes con las necesidades y características de la población. La cobertura en educación es suficiente y eficiente para atender a toda la población
Identifico organizaciones que resuelvan las necesidades básicas (salud, educación, vivienda, servicios públicos, vías de comunicación, en otras y en diferentes épocas y culturas; identifico su impacto sobre el desarrollo.	EDUCACION	Revisar el tema de cobertura en educación en todos los sectores, niveles e indicadores de calidad.	Los programas de educación ofrecidos para la comunidad de Santa Ana, resultan coherentes con las necesidades y características de la población.
		Identificar los alcances, debilidades que se presentan en la población de Santa Ana, respecto al tema educativo.	La cobertura en educación es suficiente y eficiente para atender a toda la población
ESTANDAR DE COMPETENCIA (Competencias asociadas)	COMPONENTE	OBJETIVOS	TEMATICAS
Reconozco, describo y comparo las actividades económicas de algunas personas en mi entorno y el efecto de su trabajo en la comunidad.	TURISMO	Conocer las ventajas del contexto en el desarrollo del sector turístico.	Mecanismos de funcionamiento de empresas estructuradas que ofrecen servicios turísticos en Santa Ana
		Identificar las ventajas y desventajas que proporciona el contexto de Santa Ana , en el desarrollo del sector turístico	Implicaciones que ofrece el contexto de Santa Ana en el desarrollo del sector turístico
Identifico organizaciones que resuelven las necesidades básicas (salud, educación, vivienda, servicios públicos, vías de comunicación...) en mi comunidad, en otras y en diferentes épocas y culturas; identifico su impacto sobre el desarrollo	INFRAESTRUCTURA URBANA	Socializar el plan de acción previsto para desarrollar en la población de Santa Ana.	Desarrollo e infraestructura urbana en Santa Ana,
ESTANDAR DE COMPETENCIA (Competencias asociadas)	COMPONENTE	OBJETIVOS	TEMATICAS
Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho a lo que somos hoy	TERRITORIO E IDENTIDAD	Reconocer las características de las poblaciones Afro descendientes y auto reconocerse dentro de ellas.	Conocimiento y reconocimiento de la diversidad cultural, social, física, de las personas que hacen parte de la población de Santa Ana.
			Factores limitantes y/o positivos en el desarrollo de poblaciones Afrocolombianas.

Cuadro 1. Contenidos Programáticos



Referencias Bibliográficas

Colombia, Congreso de la República (2018). Ley Estatutaria 1885 de 2018 (marzo 1). Por la cual se modifica la Ley estatutaria 1622 de 2013. Recuperado de: <https://bit.ly/2Lkia0W>

Colombia, Congreso de la República (2013). Ley Estatutaria 1622 de 2013. Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Recuperado de: <https://bit.ly/3neoZy3>

Colombia, Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2006). Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2016. Pacto social por la educación Recuperado de: <https://bit.ly/2XcsLxr>

Colombia, Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2010). Plan Sectorial 2010 – 2014. Documento 9. <https://bit.ly/3pRBdOS>

Colombia, Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2017). Plan Nacional Decenal de Educación 2016 - 2026. El camino hacia la calidad y la equidad Recuperado de:

Delors, Jacques (1996). La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (compendio). Recuperado de:

<file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/La%20Educaci%C3%B3n%20encierra%20un%20tesoro.PDF>

Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía. Sao paulo: Paz e Terra. Recuperado de: <http://forumeja.org.br/files/Autonomia.pdf>



¡Pensar, Hacer y Vender...También es Ciudadanía!

Rodolfo Rodríguez Mendrales
Ricardo Sierra Guerrero

Resumen

Pensar, Hacer y Vender...También es Ciudadanía! es una estrategia pedagógica para formar en competencias ciudadanas y emprendimiento que nació de la práctica educativa de aula en el Área de Filosofía en la Institución Educativa Técnica de Pasacaballos (Corregimiento de Pasacaballos-Cartagena de Indias-Colombia), después de una convocatoria del Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia para trabajar un proyecto de formación en competencias ciudadanas en las instituciones educativas.

La idea era elaborar un proyecto para formar en competencias ciudadanas en la escuela, pero de manera innovadora; y bueno se dio la coyuntura de que una señora necesitaba capacitar a un grupo de personas en elaboración de sandalias para poder graduarse de bachiller en la modalidad de adultos. Se brindó la oportunidad los sábados con los padres de familia y la convocatoria superó las expectativas...Pues, fue un gran número de personas, lo cual motivó a la rectora del colegio a apoyar el proyecto.

Debido a que estas actividades atraían a los padres de familia y era la oportunidad de conocer el seno familiar de nuestros estudiantes se pensó en un taller teórico práctico en el cual estudiantes y padres trabajarán juntos para vivenciar los valores y por ende, desarrollar las competencias ciudadanas de manera significativa y contextualizada, en el sentido de que son familias de escasos recursos económicos y vieron una oportunidad de mejorar calidad de vida.

De este modo, el Taller Teórico-Práctico consistía en elaborar las sandalias en familia, desarrollando valores como el trabajo en equipo, la escucha activa, el diálogo, la solidaridad, el respeto, entre, otros creando así unidades productivas que les generaban ingresos económicos para la subsistencia.

Esta actividad pedagógica y económica familiar fue trascendiendo hasta tal punto que ya no sólo se pensaba en hacer sandalias, sino que los padres de familia solicitaban otros cursos en artes y oficios, de cuyos aprendizajes se utilizaban para hacer productos que eran comercializados tales como sandalias, artesanías, repostería, ventanas, sillas, mesas, rejas...Lo cual originó la estrategia pedagógica: Pensar, Hacer y Vender...También es Ciudadanía! Es decir, pienso en mi realidad de pobreza y marginalidad, pero, debo hacer algo, entonces me capacito y con el emprendimiento elaboro un producto que vendo y así contribuyo en generar empleo en mi comunidad,



una forma de hacer ciudadanía. Esta estrategia lleva 13 años con el apoyo de Entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) la cual nos envía instructores para capacitar en cursos como soldadura, manipulación de alimentos, repostería, artesanías, cocina básica, elaboración de productos de aseo, trabajo en madera con cuero, con metal con diseños innovadores entre otros.

Palabras clave

Ciudadanía; Aprendizaje; Habilidades; Pensamiento.

Introducción

Esta estrategia pedagógica está convencida de que la mejor manera de formar en ciudadanía es vinculando a la familia en torno a un objetivo o meta común, desde nuestro enfoque apuntando a un proyecto de vida. Este proyecto de vida debe estar contextualizado con las necesidades del entorno; en el caso de nuestra Región Caribe con muchas carencias económicas. Pero la falta de recursos económicos no es lo que determina la pobreza de las comunidades, sino la falta de explotación de saberes, conocimientos, valores y actividades que pueden técnicamente generar recursos de sostenimiento familiar.

En este sentido, Pensar, Hacer Y Vender...También es Ciudadanía! es una estrategia pedagógica que forma en ciudadanía a través de la creación de microempresas conformadas por niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. En estas microempresas se forma en valores, brindando la oportunidad en los espacios flexibles con la ayuda de la profesional en psicología, como es el caso de la Dra. Yanet Muñoz Ospina quien apoya la estrategia en el área de orientación vocacional y reeducación de que se dé un cambio de creencias, costumbres, antivalores que no permiten tener ciudadanos que convivan en paz.

En las capacitaciones que se brindan que consiste en el Taller Teórico Practico Certificado por el M.E.N en elaboración de productos artesanales y técnicos, manualidades en foamy, muñequería, lencería, entre otros se orienta a los miembros familiares a trabajar en equipo para lograr una meta u objetivo común, es allí; donde se hace énfasis en las competencias básicas ciudadanas: trabajo en equipo, escucha activa, dialogo, solidaridad, manejo de emociones que de una u otra manera propician la reconstrucción de tejido social, que se ha venido perdiendo a través del tiempo.



La falta de recursos económicos era la excusa que tenían muchos padres de familia para no interactuar en las actividades escolares enfocadas a la formación en valores. Con pensar, hacer y vender también es ciudadanía! Superamos esta excusa y hemos capacitado a más de dos mil personas porque hemos brindado los espacios flexibles para que trabajen, exploten sus habilidades y sean autogestores de sus recursos económicos en el contexto educativo en las microempresas que ellos mismos van creando, con la asesoría de un profesional que asesora en los cursos: plan de negocios, mercadeo y venta y formulación y evaluación de proyectos de inversión.

En esta estrategia pedagógica se parte de las políticas de inclusión, es decir pueden hacer parte de nuestras capacitaciones, estudiantes, padres de familia, profesores, directivos docentes, administrativos, servicios generales, vigilantes y todas aquellas personas que hacen parte de las comunidades educativas de los colegios o comunidades a los cuales se lleven nuestros servicios: Talleres, Conferencias, Charlas, Capacitaciones, Asesorías Pedagógicas, formulación de proyectos, Psico-orientación y acompañamientos en los diferentes proyectos de vida familiares del departamento de Bolívar.

Fundamentación del problema

El problema identificado tiene que ver con el alto índice de agresividad que presentan los hogares de nuestros estudiantes de los colegios oficiales y privados, no sólo de la ciudad de Cartagena sino de todo el país que se refleja en las aulas y fuera de ellas, sobre todo en las calles, donde reunidos en grupos denominados pandillas fomentan desordenes y alteración del orden público, causando pánico e inseguridad en los vecinos y personas que no tienen que ver con la mala formación de estos jóvenes en sus familias.

La idea de esta estrategia pedagógica es formar a nuestros estudiantes en competencias ciudadanas, que desarrollen las habilidades para convivir pacíficamente y tomen conciencia que el hombre es un ser social y necesita relacionarse con los demás partiendo de unos valores como el dialogo, el respeto y la tolerancia. Todas las organizaciones sociales requieren de unas normas mínimas que faciliten la interacción armónica entre los individuos y más la nuestra que es educativa y requiere de mucho orden para que se puedan asimilar y desarrollar todas las actividades académicas y pedagógicas que formen a nuestros estudiantes.



Metodología

¡Pensar, hacer y vender...también es ciudadanía!

Las experiencias prácticas han mostrado, demostrado y comprobado que la mejor manera de alcanzar objetivos, ciertos, reales y concretos es a través de la construcción colectiva, por lo tanto la estrategia metodológica de implementación de esta estrategia pedagógica estará fundamentada en el aprender haciendo significativamente, respetando los Estilos y Ritmos de Aprendizaje de cada ser humano mediante el empoderamiento y reconocimiento de capacidades individuales en el proceso de formación de las distintas áreas tanto técnicas, básicas y transversales.

Por ejemplo; los estudiantes junto con sus padres de familia aprenden a hacer sandalias, manualidades, artesanías, cocina, trabajo en madera y simultáneamente los profesionales idóneos van acompañando en el estímulo y apropiación de las competencias ciudadanas, es decir que dialoguen, que se escuchen, que trabajen en equipo, de una forma solidaria y respetuosa. Este proceso se continúa permitiéndoles identificar oportunidades de negocios gracias a los conocimientos adquiridos mediante los procesos de formación técnica, destrezas y habilidades propias; diseño y construcción de su propio plan de Negocio, para finalmente llegar a la concreción de un Proyecto de negocio familiar.

Resultados y discusión

1. Convivencia pacífica en la comunidad educativa.
2. Disminución de la deserción escolar.
3. Hay sentido de pertenencia.
4. Se ha mejorado el rendimiento académico, del Nivel Bajo hemos subido al Medio y lo hemos sostenido mostrando que podemos llegar al Alto con los procesos pedagógicos que se están adelantando.
5. Se ha logrado vincular al padre de familia a las actividades académicas, culturales y formativas que se planean.
6. Erradicación del pandillismo en el entorno en el que está ubicada nuestra institución educativa, pues se ha establecido un convenio con el SENA a través del cual se capacitan en diversos cursos a los jóvenes para que trabajen en las empresas de MAMONAL.



7. Más de 3000 personas capacitadas en diversos cursos del SENA para acceder al mercado laboral de la Zona Industrial. En estos momentos se están capacitando a mujeres madres cabezas de hogar en manipulación de alimentos, cocina, elaboración de productos de aseo para que prontamente trabajen y tengan el poder adquisitivo para comprar a sus hijos que son nuestros estudiantes sus útiles escolares y su uniforme.

8. Formulación de más de 30 planes de negocios en distintas áreas productivas como son: micro empresa de sandalias, restaurantes, panaderías, taller de artesanías, taller de mecánica y venta de repuestos de motos, comidas rápidas, peluquerías, salones de Belleza, almacén de variedades y miscelánea, taller de soldadura y metal mecánica, micro empresa acuaturística, entre otras.

9. Cambio de actitud en los habitantes del corregimiento de Pasacaballos, ha disminuido el número de muchachos en las esquinas perdiendo el tiempo, están estudiando, trabajando o practicando un deporte, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias.

Conclusiones o reflexiones finales

Esta estrategia pedagógica no puede dejar a un lado el acompañamiento brindado por el Ministerio De Educación Nacional en el Proyecto Piloto Red para el Desarrollo de Aprendizajes sobre Educación en Contextos de Violencia en el marco de la Política de Competencias Ciudadanas REDE@PRENDER, iniciativa de EUROSOCIAL, Educación y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ejecutado desde el 2009 por el CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli-ONG italiana) y el MEN. Tampoco puede perder de vista el acompañamiento de PIEME Programa Iniciativa Emprendedora Escolar Cartagena 2012 Proyecto Modelo de Educación Emprendedora para el Sistema Educativo Público. Hay que continuar con este primer proyecto innovador e integral que inicia el fomento y promoción a la cultura del Emprendimiento Empresarial en el Sistema Educativo Público del Distrito de Cartagena de Indias. La idea es no detener esta práctica pedagógica y continuar el proceso para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida en el Distrito de Cartagena y el Departamento de Bolívar con el apoyo de una escuela que promueva las experiencias significativas no sólo en los estudiantes sino con todo el núcleo familiar para construir tejido social que permita la consolidación de proyectos de vida que permitan trascender de una escuela tradicional descontextualizada a una que sea productiva, formando en ciudadanía para transformar realidades.



Estos acompañamientos debe continuar para seguir fortaleciendo la articulación pedagógica que conlleve a consolidar la unión entre la formación en competencias ciudadanas y el emprendimiento para reconstruir tejido social y dignificar las familias del Distrito de Cartagena, Bolivarenses y del Caribe a través de la creación de unidades de negocios familiares.

Bibliografía

Ley general de la Educación (ley 115 de 1994).

Ley 1014 de 2006 Ley de Emprendimiento. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

Plan Decenal de Educación 2006-2015.

Plan de Desarrollo de Bolívar 2012-2015. Plan Distrital de Desarrollo 2012-2015.

Guía de Aplicación Llave Maestra Herramientas para la Equidad ACNUR La Agencia de la ONU para los refugiados, Corporación Opción Legal.

Serie Guías N°6 Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas Formar para la ciudadanía! Sí es posible! Lo que necesitamos saber y saber hacer. Ministerio de Educación Nacional República de Colombia. Revolución educativa Colombia aprende.

Proyectos Pedagógicos en Construcción de Ciudadanía. Proyecto Red para el Desarrollo de Aprendizajes sobre Educación en Contextos de Violencia en el marco de la Política de Competencias Ciudadanas REDE@PRENDER.

Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta de integración a las áreas académicas. Enríque Chau, Juanita Lleras y Ana María Velásquez.

Cartillas de Orientaciones Para La Institucionalización De Las Competencias Ciudadanas Brújula Programa de Competencias ciudadanas. Ministerio de Educación Nacional República de Colombia. Educación de Calidad. El Camino Para La Prosperidad. Prosperidad para todos. CISP COMITATO Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli.



Comum e revolução: Um debate a partir das obras de hardt e negri e dardot e laval.

Felipe De Queiroz Braga
Andrea Ávila

Resumo

A presente palestra tem como objetivo propor uma discussão, baseada em uma análise crítica, sobre o horizonte revolucionário do conceito do *comum* dos autores Pierre Dardot e Christian Laval e Antonio Negri e Michael Hardt, a partir da crítica que os primeiros fazem em *Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI*, à proposta dos últimos na obra *Commonwealth*. Argumentaremos que ambas as obras apresentam importantes contribuições à compreensão dos movimentos sociais e políticos anticapitalistas que surgiram nas últimas décadas, no entanto, não deixam de apresentar limitações, sobretudo, quando apreciadas a partir da teoria marxista.

Palavra chave

Comum; Revolução; Propriedade.

Introdução

Nos últimos anos tem se dado uma forte discussão em torno da categoria do *comum*, principalmente no interior do pensamento crítico, a qual compreende a sua dimensão política, filosófica e epistemológica. Como é recorrente nos processos de abstração da realidade através de conceitos trabalhados por vários pensadores, o *comum* tem tido diferentes entendimentos ao longo do tempo, mas encontrando como elemento de interseção a ideia de *algo compartilhado por um grupo de pessoas*.

A importância que tal debate adquire está relacionada à necessidade de explicar as configurações contemporâneas tanto do exercício do poder e da dominação, quanto das possibilidades e limites das formas de resistência, em particular após do fim do denominado socialismo real e da crise financeira global de 2008, que não levou à queda do capitalismo, como foi anunciado por diversos autores nessa conjuntura. Desta forma, ao precisar fazer frente à ideia de um pensamento único em torno da inescapável concretude do capitalismo contemporâneo e encontrar uma alternativa a esse aparente *fim da história*, muitos autores tem se voltado aos movimentos sociais e as lutas democráticas que nas últimas décadas eclodiram em diversas partes do mundo contra



as privatizações, a expropriação dos espaços públicos, a austeridade econômica e reivindicando mais democracia.

Dentro desse conjunto de pensadores que tem feito aportes a esta reflexão encontram-se, por um lado, Michael Hardt e Antonio Negri, quem nos textos de *Multidão: Guerra e democracia na era do Império* e *Commonwealth* apresentam uma definição do *comum* ao mesmo tempo em que o colocam como eixo do projeto político de superação do capital. Por outro lado, estão Pierre Dardot e Christian Laval, que tomam como base as questões levantadas pelos primeiros e discutem em *Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI*, redefinindo o conceito de seus predecessores e oferecendo uma alternativa de projeto emancipatório sustentado no que denominam de “princípio do *comum*”.

Crítica ao comum de Hardt e Negri

Dardot e Laval no texto dito, enfatizam a importância do trabalho de Michael Hardt e Antonio Negri para a filosofia política, quem ao produzirem a “primeira teoria do comum”, possibilitaram que a reflexão teórica avançasse do “plano das experiências concretas dos comuns” para um conceito “mais abstrato e politicamente mais ambicioso”. Essa categoria política deixou de ser apenas um adjetivo para tornar-se, a “designação de um regime de práticas políticas, lutas, instituições e pesquisa que abrem as portas para um futuro não capitalista (Dardot e Laval, 2017, p. 18). Noutros termos, com Hardt e Negri o comum passou a representar “o princípio filosófico” que, por um lado, deve permitir que se conceba um futuro possível para além do capitalismo, sobretudo em seu estágio neoliberal, e, por outro, possibilitar que este futuro seja livre também de qualquer “nostalgia” ou associação com o “socialismo de Estado, [bem como] de qualquer monopólio estatal sobre serviços públicos burocratizados” (Idem, p. 200).

Será a partir da apreciação crítica do trabalho de Hardt e Negri, que os filósofos franceses irão “refundar de maneira rigorosa o conceito de comum, rearticulando as práticas a que ele hoje dá sentido e certo número de categorias e instituições [...] que fizeram do comum um termo valorizado e ao mesmo tempo maldito na história ocidental” (Idem, p.18). Cabe apontar que algumas críticas que eles fazem às formulações teóricas de Hardt e Negri não se restringem apenas ao conceito “comum”, elas visam à estrutura do edifício conceitual destes autores, abarcando outras categorias como: a multidão, a natureza essencialmente rentista do capitalismo contemporâneo, a autonomização crescente do trabalho imaterial e o desenvolvimento espontâneo de um comunismo informacional (Idem, pp. 60-61; 199-244). Essas críticas, presentes em



Sauver Marx? Empire, multitude, travail immatériel (2007) e *Marx, prénom: Karl* (2012), são retomadas em *Comum*. Desse ponto deriva-se que em virtude da extensão do debate, não objetivamos fazer nem a crítica da obra completa de Hardt e Negri, nem uma crítica exaustiva ao conceito “comum” proposto por todos eles. Antes, apresentaremos o que a dupla Dardot-Laval traz de original ao debate em torno dessa categoria política e as suas críticas do conceito de comum desenvolvido por Hardt e Negri que podem ser divididas entre: contradição teórica e imprecisão conceitual.

Esta última, baseia-se no fato que na obra de Hardt e Negri o *comum* abarca ao menos quatro dimensões heterogêneas: i) natural: “a riqueza comum do mundo material –o ar, a água, os frutos da terra e todas as dádivas da natureza–, o que nos textos políticos europeus clássicos em geral é considerado herança da humanidade como um todo, a ser compartilhada por todos”; ii) vida social: “os resultados da produção social que são necessários para a interação social e para mais produção, como os conhecimentos, as imagens, os códigos, a informação, os afetos e assim por diante” (Hardt e Negri, 2016, p. 8); iii) produção biopolítica: o trabalho cognitivo ou intelectual voltado para a produção de bens imateriais (Idem, pp. 40-41; 154-160); e iv) político: o comum também é compreendido como o resultado da luta coletiva da multidão.

O amálgama desses diferentes significantes num único conceito, enfatizam Dardot e Laval, além de “não esclarecer a concepção do comum”, impede a “elaboração de uma nova política”. Essa imprecisão conduz a sérios problemas na análise. Ao tentar unir elementos díspares o conceito se torna muito amplo e vago, como “um princípio trans-histórico que vale desde a origem dos tempos até a sociedade superior para a qual estamos nos dirigindo” (Idem, p. 205- 206).

Além disso, apesar de Hardt e Negri afirmarem que suas formulações estão no campo marxista, Dardot e Laval compreendem que eles adotam em seu exame uma perspectiva teórica proudhoniana. A ideia exposta pela primeira dupla de que o açambarcamento e a expropriação da riqueza comum produzida pela multidão se constituem um “roubo” pode ser vista como uma “reedição do esquema proudhoniano”, que “fica velada por trás de uma referência constante a Marx” (Idem, p. 201). Apontar a distinção entre a visão marxista e proudhoniana do *comum* possibilita entender, por um lado, as diferentes visões envolvendo o conceito e as respectivas implicações teóricas e práticas de cada uma delas, e, por outro lado, qual perspectiva teórica cada duo de autores adotará.



Na análise proudhoniana o *comum* é produzido espontaneamente pelos indivíduos e as sociedades, e é uma dimensão do dinamismo social, da “força coletiva”, cujo resultado é apropriado pelas classes dominantes por intermédio de certos mecanismos e dispositivos jurídicos e políticos, sobretudo a propriedade privada e o Estado. Dardot e Laval entendem que Proudhon “foi um dos primeiros teóricos da instituição do comum” e “quem refletiu, muito mais sistematicamente que Marx, sobre a instituição alternativa à propriedade privada e à do Estado (Idem, p. 393). Não nos deteremos nas controvérsias que envolvem esta afirmação, antes, enfatizaremos dois pontos voltados especificamente à nossa análise: i) a importância que o direito possui dentro da teoria proudhoniana, enquanto instrumento político para impedir o “roubo” do comum produzido coletivamente pelo Estado e as classes dominantes. O direito pode servir para “devolver à sociedade a plena posse de sua força coletiva” (Idem, p. 395). Logo, será a partir da criação de instituições com base no direito social que a propriedade privada e também a estatal poderão ser superadas; ii) Dardot e Laval também apoiarão suas formulações na teoria proudhoniana: este aspecto fica evidente não apenas na ênfase que a análise jurídica tem no texto, mas, sobretudo, nos pressupostos teóricos que eles adotam em suas proposições políticas para se superar o capitalismo por meio de uma revolução do comum.

Marx, por sua vez, entende que o comum não é produzido espontaneamente, antes, é produto do capital e de seu poder de comando sobre o trabalho por meio da organização da produção. Partindo das formulações de Marx contidas em *O Capital*, Dardot e Laval enfatizam que “o capital em seu frenesi de enriquecer, produz o comum para seu próprio interesse, transformando a força coletiva dos trabalhadores por ele organizada em força coletiva do capital” (Idem, p. 201). No modo de produção capitalista, o capital organiza as relações sociais de produção de modo a pôr a seu serviço com o objetivo de produzir o excedente necessário à acumulação; e nela, por meio da exploração da força de trabalho (apropriação de mais-valor da classe proletária), o comum é apropriado pela classe burguesa. Nos termos de Marx, tal apropriação do comum ocorre por meio da subsunção do trabalho ao capital. Logo, a problemática marxista para a instauração da revolução do *comum* (usando o mesmo léxico dos autores) difere sensivelmente da proudhoniana. Enquanto a última vê na superação da propriedade privada o objetivo da revolução, a primeira compreende que a superação das relações capitalistas de produção ocorrerá quando os trabalhadores expropriarem os expropriadores e assumirem o controle do capital, colocando em marcha a revolução comunista.



O comum em Dardot e Laval

Para Dardot e Laval, o comum não é um bem, uma coisa ou um “objeto ao qual deva tender a vontade, seja para possuí-lo, seja para constituí-lo”; ele é uma instituição que se efetiva na esfera coletiva. Contrariamente ao proposto por Hardt e Negri, eles consideram que *a priori* “nada é comum em si ou por natureza”, senão que são as práticas coletivas que determinam, em última instância, quando uma coisa ou grupo de coisas devem entrar na esfera do *comum* (Dardot e Laval, 2017, p. 618).

Igualmente, consideram que a luta política das últimas décadas tem sido motivada pelo princípio do comum, o qual permitiu o fortalecimento dos mais variados movimentos sociais e suas lutas democráticas contra o avanço do que os autores denominam de racionalidade neoliberal. Assim, o *comum* teria um caráter político que lhes dá sentido a essas lutas ao mesmo tempo em que se apresenta como o resultado delas, como a efetivação do comum, é dizer que poderia se compreender como um elemento estruturado e estruturante das lutas. Além dessa propriedade, o conceito é visto como uma nova forma democrática de governo, imprimindo-lhe, portanto, três atributos diferentes articulados entre si: princípio político, práxis instituinte e governo.

Enquanto princípio político, o comum, para os autores, jamais se apresenta como uma fórmula pré-estabelecida ou na forma de um esquema universal, antes, ele é o produto de uma construção política coletiva. Por isto eles colocam como afirmação central da sua análise que “o comum exige que a participação [coletiva] numa mesma atividade seja o fundamento da obrigação política, portanto que a co-atividade seja o fundamento da coobrigação” (Idem, p. 616). Desta forma, será o princípio político do comum que deverá definir as ações da práxis instituinte, bem como a forma de governo do comum. Assim, o *comum* se efetiva a partir da criação de novas instituições sociais, jurídicas, econômicas e políticas que determinarão o que deve ou não ser compreendido como propriedade privada ou bem comum. A produção de uma política do comum, que faça dele o princípio de transformação social, se erige como um ponto fundamental na efetuação dessa revolução. Somente a partir da política do comum é possível criar instituições do comum, que façam oposição entre o novo direito de uso e o clássico direito de propriedade e que estabeleçam aquilo que seria impossível de ser apropriado de forma privada. Nas palavras dos teóricos, o princípio político do comum delinea “uma norma de *inapropriabilidade*”, a qual para se instituir, precisa refundar todas as relações sociais a partir deste princípio, e que “a práxis instituinte [irá] determinar o que é inapropriável” (Idem, p. 619-20).



Sincronicamente à efetivação do comum no âmbito jurídico, com a criação de um novo direito daquilo que é inapropriável estatal ou individualmente, o comum deve também se estabelecer nas esferas econômica, social e política. Na primeira delas, o comum deve se efetivar por meio da criação da empresa comum que levaria à emancipação do trabalho, toda vez que unicamente “será possível liberar o trabalho do domínio do capital se a empresa se tornar uma instituição da sociedade democrática e deixar de ser uma ilha de autocracia patronal e acionária” (Idem, p. 519). Como veremos mais adiante, essa asseveração, porém, não significa que a dupla de intelectuais esteja visando a uma ruptura total nas relações sociais de produção, como propõe uma interpretação marxista. Os autores não entendem a revolução do comum como a criação de um “modo de produção” novo ou diferente, nem como a superação da propriedade privada, ou a extinção do Estado, senão como a prevalência da empresa comum na economia. Esta ideia é controversa e problemática em diversos pontos. À medida que os autores se auto-intitulam como a vanguarda da revolução, e se propõem a “refundar rigorosamente o conceito do comum”, libertando-o das experiências desastrosas do século XX, o “totalitarismo soviético” e a social-democracia europeia, eles não propõem nada além do que um programa reformista, que controle o grande capital oligopolista através de instituições propriamente capitalistas como o direito.

Com relação às esferas social e política, Dardot e Laval esboçam que o *comum*, enquanto princípio político, tem “vocação a prevalecer tanto na esfera social como na esfera política pública” (Idem, p. 619). Isto significa que existem tanto comuns *sociais* quanto comuns *políticos*. Este último teria a labor de administrar o “bem comum” em todos os níveis, desde o local ao mundial.

A relação entre a organização política e socioeconômica do comum é sintetizada pelos autores nos seguintes termos: “o princípio político do comum delinea os contornos de uma dupla federação: federação dos comuns socioeconômicos constituídos sobre uma base socioprofissional, federação dos comuns políticos constituídos sobre uma base territorial. Constitui-se assim uma democracia dos comuns” (Idem, p. 619). Inegavelmente, tal conceito federalista deriva-se do pensamento proudhouniano e não marxista. Como veremos mais adiante, não apenas nesse ponto, mas grande parte das formulações deles estão arraigadas nesse campo teórico.

Comum e Revolução

A revolução do comum do Dardot e Laval referida, está fortemente ancorada na corrente do socialismo associacionista, que vai de Proudhon à Castoriádis, passando por Jaurès,



Leroy, Mauss e Gurvitch. Para Castoriádis (*apud* Dardot e Laval, 2017, p. 611): “revolução não significa nem guerra civil, nem derramamento de sangue. Revolução é uma mudança em certas instituições da sociedade em curto espaço de tempo”. Este é o significado que para os autores teria a revolução do comum.

Além do mais, o projeto de revolução proposto pelo duo francês, não implica nenhum tipo de transição ou fase intermediária com a participação do Estado. Conforme foi detalhadamente colocado em *A nova razão do mundo*, os autores apontam acertadamente que o Estado também está enredado na lógica neoliberal e por isso há “pouca margem à ‘adaptação’ do capitalismo por meio do direito público e da proteção social em suas bases atuais” (Dardot e Laval, 2017, p. 608). Consequentemente, o processo revolucionário somente poderia ser contemplado na articulação de “práticas de natureza muito diversas, isto é, econômicas, sociais, políticas e culturais”. (Idem, p. 615). Isto, além de se configurar quase como uma obviedade desde o ponto de vista de qualquer processo social de transformação, apresenta alguns pontos obscuros na medida em que não especifica *quem* seria o sujeito revolucionário encarregado que levar a cabo essa articulação, nem os mecanismos ou formas - o *que fazer ou como* - que permitiriam sua realização.

Como bem observou Negri (2014), há um “desenvolvimento idealista” do conceito de comum na análise de Dardot e Laval, que pode se derivar do que para ele seria o abandono do materialismo histórico. Numa tentativa de desvincular suas formulações de qualquer relação com o “totalitarismo”, os autores acabam jogando o bebê junto com a água suja. O conceito que eles pretendem “refundar” a partir das experiências contemporâneas, além de não levar em consideração a situação concreta da conjuntura política e econômica é, em última instância, reformista e não revolucionário.

O abandono do materialismo histórico assinalado, fica evidente quando examinamos juntos os livros *A nova razão do Mundo* e *Comum*: em ambos os textos o conceito de classe social é deixado de lado, e, em consequência, a análise dos conflitos e lutas entre as classes presentes nas respectivas conjunturas são suprimidas, conduzindo a erros simétricos: ora superestimando ora subestimando a conjuntura política, econômica e social. Vejamos.

Na primeira obra, o neoliberalismo é retratado como um processo inelutavelmente totalizador, resultado de um projeto político ideológico intelectual, que abrange e estrutura desde os Estados nacionais até as subjetividades individuais. Porém, não se apresenta nenhuma referência concreta com relação a quem, ou mesmo a que classe,



possa estar se beneficiando com a perpetuação desse cenário. Ou seja, não há classes e nem grupos organizados, há apenas instituições e sujeitos individualizados que agem como autômatos do neoliberalismo em constante concorrência pela valorização e supremacia do seu capital individual.

Por sua vez, em *Comum* o quadro descrito é totalmente contrário. Apesar de apontar, ainda que minimamente, a influência do capital contemporâneo na construção das subjetividades dos indivíduos, o cenário traçado é triunfalista e exageradamente otimista. Enquanto tendem a reduzir a importância dos conflitos e confrontos entre classes sociais distintas que ocorrem nesta fase do neoliberalismo, eles se mostram incapazes de proporcionar qualquer consideração coerente sobre a natureza da ruptura que levaria do sombrio cenário do neoliberalismo que identificaram ao governo do *comum*.

A partir do anterior, é possível fazer duas leituras distintas sobre esta revolução do comum. Por uma parte, a revolução pode ser pensada como a implosão simultânea do capitalismo em diversas partes do mundo, por meio da *práxis* do comum. Essa leitura inclui as lutas individuais e coletivas, tanto locais quanto espalhadas por todo o mundo, como já foi dito, além de abarcar todas as três propriedades do conceito de comum colocadas por eles no âmbito da luta política. No entanto, a proposta dos autores não envolve uma transformação radical com relação à superação da propriedade privada e com ela a construção de uma nova sociedade do comum. Deste ponto específico decorre a segunda leitura do conceito de revolução de Dardot e Laval: reformismo.

A revolução tão esperada ao longo do livro é apresentada pelos autores como o controle do grande capital oligopolista e do mercado pelo comum. Essa compreensão da revolução não se restringe à dupla intelectual, antes, é o resultado de uma vertente da esquerda contemporânea que se propõe a pensar a revolução numa versão nem tão radical como a revolução comunista, nem tão reformista como a social-democracia. No entanto, ao passo que deixam de ser radicais na crítica ao capitalismo, são enredados no canto da sereia do reformismo. Por isso, em última instância, as proposições políticas dos autores só são revolucionárias dentro de uma perspectiva de “fim da história”.

Em resumo, ao passo que eles propõem o comum como “princípio de emancipação do trabalho” e a prevalência da associação e da empresa comum na esfera da economia, eles entendem que a revolução não constitui a superação da propriedade privada, tampouco um novo “modo de produção” ou um “terceiro” interposto entre o mercado e o Estado, mas o controle do grande capital. Esta visão é problemática e contraria a



própria ideia de revolução comunista. Devemos lembrar que, como sintetizaram Engels e Marx (2012, p. 60), “o comunismo pode resumir sua teoria numa única expressão: a abolição da propriedade privada”. Logo, apesar da importância do trabalho de Dardot e Laval à reflexão do comum, algumas de suas proposições políticas são reformistas, e podem conduzir, em última instância, a uma (não) revolução do comum.

Agora bem, com relação à proposta de Hardt e Negri acerca do comum consideramos que ela, igualmente, apresenta dificuldades para traçar um caminho com um horizonte revolucionário. O primeiro assunto a ressaltar é o papel central - tanto quanto em Dardot e Laval - que a propriedade privada tem na sua análise (2004, 2016). Ali, estudam o vínculo entre o comum e o privado e o público, para mostrar como ela, a propriedade, é eixo da estrutura do sistema capitalista sobre o que se sustentam os mecanismos fundamentais de divisão e exclusão social. Os autores (2016) introduzem o conceito da “república da propriedade” para indicar a forma de governo dominante nas sociedades contemporâneas, que combina o republicanismo com a prevalência da propriedade e seus chamados direitos, fazendo com que o Estado não só seja possuidor de propriedade senão o garante e vigilante do respeito desses direitos de propriedade privada. Isso não é um assunto pouco relevante, na medida em que proporciona um outro argumento a Hardt e Negri para elevar o comum como o principal mecanismo da multidão para se opor ao capitalismo.

Assim, o comum se erige como princípio e fim da luta, simultaneamente, porque possibilita a organização e articulação da multidão com o intuito de “fugir” do domínio e comando do capital o que, por sua vez, permitiria a produção do comum e este é visto como “uma fonte inesgotável de inovação e criatividade” (Idem, 2016, p. 132) essencial para a produção imaterial e biopolítica.

Não obstante, na sua dissertação os autores não esclarecer o modo como seria possível a superação da propriedade privada, tanto como categoria filosófica quanto como realidade. Tendo em consideração o fato de que a propriedade privada é um dos princípios primordiais do sistema capitalista e, conseqüentemente, sua interiorização e normalização na vida social é constantemente estimulada, isso deveria ser um tema inexoravelmente analisado; especialmente na fase do neoliberalismo onde, como demonstram Dardot e Laval, a ideia da empresa de si e o empreendedorismo (2016, p. 328-38), junto ao que eles chamam de neossujeito (Idem, p. 372-76) está sendo amplamente difundida a nível mundial.



Por outra parte, cabe questionar se o predomínio da produção do comum nas suas dimensões material e imaterial – à quais Hardt e Negri dão muita importância em sua reflexão - sobre às das práticas políticas, sociais e comunitárias que se tem apresentado nas últimas décadas, pode se erigir como um limite do comum como contraposição à república da propriedade. A gestão ou administração comunitária dos bens comuns não necessariamente levaria a uma estruturação política e social não hierárquica ou sem presença de relações de poder, nem à abolição da propriedade, embora ela seja transformada. A propriedade pode não ser mais de um indivíduo o de um Estado, senão de uma coletividade/comunidade, não obstante segue sendo propriedade e por isso mantém e reproduz a clássica divisão capitalista entre proprietários e não proprietários.

Igualmente, é discutível que Hardt e Negri não inquiram pelas relações capitalistas de exploração e dominação dentro da sua análise como resultado do seu entendimento sobre o caráter autônomo (quase espontâneo) da produção imaterial e biopolítica frente o comando capitalista que leva a que este seja exclusivamente parasita e rentista dessa produção no neoliberalismo. A centralidade e relevância do problema da exploração e dominação na luta pela emancipação é inquestionável, razão pela qual a omissão feita nas reflexões dos autores diminui consideravelmente o horizonte revolucionário da proposta e leva-a muito longe daquela pensada pelo marxismo.

Além do mais, a noção de êxodo da multidão com relação ao império que possibilitaria a criação do comum, também pode ser compreendida no âmbito da reforma e não da revolução, na medida que recusa a confrontação que lhe é própria a luta de classes no caminho à supressão da exploração e da dominação e com elas das classes mesmas. Ao fugir e não enfrentar, abre-se a oportunidade para que, ainda em presença de mudança nas estruturas econômicas e políticas, se mantenham relações sociais baseadas no ethos capitalista ou estourem confrontos derivados da existência de redutos das estruturas de dominação.

Por fim, apesar das limitações teóricas de Hardt e Negri e Dardot e Laval e das suas propostas de caráter reformista, o avanço proporcionado pelas suas análises sobre o comum se erigem como um ponto de início importante na disputa pela construção e produção do comum com um alvo revolucionário, que deve ser retomada e entendida como uma tarefa intelectual e prática que coloque em diálogo os exercícios concretos de criação desse comum com a abstração que consiga explica-los e/ou dar-lhes um horizonte realmente transformador com relação ao capital.



Referências bibliográficas

- Borón, A. (2002). *Imperio & imperialismo: uma leitura crítica de Michael Hardt e Antonio Negri*. Buenos Aires, Argentina. CLACSO.
- Camfield, D. (2007). The Multitude and the Kangaroo: A Critique of Hardt and Negri's Theory of Immaterial Labour, *Historical Materialism*, 15(2), 21-52.
- Dardot, P., e Laval, C. (2016). *A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal*. São Paulo, Brasil. Boitempo.
- _____. (2017). *Comum ensaio sobre a revolução no século XXI*. São Paulo, Brasil. Boitempo.
- _____. (2012). *Marx, prénom: Karl*. Paris, França. Gallimard.
- _____. (2007). *MOUHOUD, El Mouhoub. Sauver Marx? Empire, utitude, travail immatériel*. Paris, França. La Découverte.
- Hardt, M., e Negri, A. (2016). *Bem-estar comum*. Rio de Janeiro, Brasil. Record.
- _____. (2004). *Multitud: Guerra y democracia en la era del imperio*. Barcelona, Espanha. Debate.
- Marx, K. (2013). *O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital*. São Paulo, Brasil. Boitempo.
- Marx, K., e Engels, F. (2012). *Manifesto do partido comunista*. São Paulo, Brasil. Penguin Classics/ Companhia das Letras.
- Negri, A. (2014). Comum, entre Marx e Proudhon. *Lugar comum – Estrudos em Mídia, cultura e democracia*. (43).
- Turchetto, M. (2003). The Empire strikes back: On Hardt and Negri. *Historical Materialism*, 11(1), 23-36.
- _____. (2004). Antonio Negri e o triste fim do 'operaismo' italiano. *Crítica Marxista*, (18), 84-99.



Revisión histórico-narrativa sobre los movimientos sociales en la capital paulista.

Lara Paixão
Aurea Maria Zöllner Ianni

Resumen

Este trabajo presenta los resultados preliminares de una investigación de doctorado sobre el tema de la salud junto y movimientos sociales por viviendas. La revisión histórico-narrativa sobre los movimientos sociales en la capital paulista muestra un proceso acelerado de industrialización acompañada de la diferenciación del acceso a los servicios y bienes de consumo. Las cuestiones migratorias, raciales y de género son apuntadas como elementos importantes de la disparidad en la formación de las clases medias paulistas. Las movilizaciones sociales entre las décadas de 20 y 70 tuvieron aporte ideológico anarquistas y posteriormente comunista configurando distintos caminos de lucha. La lucha por la salud, presente en los espacios ligados a la iglesia católica, gana proximidad con las demás luchas de carestía de vida presentes en los barrios periféricos de la capital. En estas luchas son destacadas la presencia de mujeres, estudiantes, profesionales de salud y personas ligadas al movimiento de la reforma sanitaria. La literatura apunta el cambio de temas de salud con vieses de autocuidado comunitario para temas de lucha por derechos al acceso a servicios de atención a la salud. La presencia de las discusiones sobre los determinantes sociales de la salud junto a las asociaciones de barrio es un punto clave para dicho cambio temático. Esta investigación preliminar apunta elementos de análisis sobre las luchas sociales contemporáneas junto de las camadas populares urbanas, la lucha por el derecho a la salud y la acción del Estado en el campo de la Salud Pública.

Palabras clave

Movimientos Sociales; Derecho a la Salud; Participación Social.

O Problema e o método

O tema das mobilizações sociais e sua relação com a pauta por direito a saúde parece ser especialmente sensível no Brasil à medida que a conquista do Sistema Único de Saúde esteve vinculada ao processo de institucionalização da participação social por meio dos Conselhos de Saúde. Entender como a pauta da saúde é compreendida pelos movimentos sociais urbanos contemporâneos abre um caminho de investigação que



pode ajudar na compressão das características da sociedade moderna e suas expressões na constituição dos movimentos sociais.

Este texto apresenta uma parte preliminar de uma pesquisa de doutorado que está sendo realizada junto a movimentos sociais de moradia da capital paulista e tem como objetivo proporcionar um diálogo entre o caminho histórico da constituição do Sistema Único de Saúde e as lutas atuais por direito a saúde. Entendemos que compreender o processo histórico de formação urbana do território estudado foi uma etapa fundamental para o aprofundamento das perguntas de pesquisa e dos caminhos de investigação e análise. Este trabalho apresenta então parte desta investigação sócio histórica.

Para tanto realizamos uma revisão histórico-narrativa dividida em três núcleos bibliográficos. No primeiro investigamos as produções desenvolvidas na década de 70 e 80 dedicadas a analisar o processo de industrialização da capital e as mobilizações sociais advindas desse processo, incluindo as sindicais. No segundo investigamos a literatura que tratava da mobilização social voltada a pauta da saúde na capital paulista. Por fim utilizamos um grupo de referências para apoiar análise sobre as mudanças contemporâneas observadas nas mobilizações sociais da capital.

Aspectos históricos sobre a formação da Metrópole Paulista

As lutas sociais urbanas na capital paulista

Ao longo do processo de industrialização, iniciado sobretudo a partir de 1890, o centro da capital paulista foi se desenvolvendo como espaço político-territorial de tensão porque ocupava um lugar de múltiplos interesses: de um lado as ações higienistas do Estado e de outro a arena de lutas e revoltas de rua estreadas devido às desapropriações feitas pelo Estado, ou inspiradas em ideais libertários (Rolnik, 1994).

As estratégias de agitação nas ruas foram, segundo Rolnik (1994) uma forte influência das ideias anarquistas que chegaram ao país junto com os imigrantes italianos e espanhóis. A autora aponta como primeiras grandes mobilizações as iniciadas na segunda década do século XX, quando anarquistas lideraram a greve dos inquilinos com interrupção de pagamentos de aluguéis aos proprietários. A autora diz ainda que as ideias anarquistas penetravam os espaços de discussão sobre os alugueis e inspiravam pautas de luta operária que iam além do inquilinato como o autoritarismo, às jornadas de 15 horas de trabalho, o trabalho infantil e feminino e os baixos salários. A organização autônoma nos bairros por meio de atividades culturais, esportivas, escolares ou sindicais eram a estratégia da ação anarquista que desta forma construía uma rede de apoio para rápida mobilização dos movimentos populares. Assim se



constituíram, por exemplo, as ligas populares contra a carestia da vida, que se mobilizaram desde 1912 até 1915. As necessidades apontadas e discutidas nos bairros ao se encontrarem com as pautas de condições de trabalho dos operários, constituíram um cenário que possibilitou a primeira greve geral de 1917, caracterizada por reivindicações de melhorias de condições de trabalho e de carestia de vida.

O movimento popular, no entanto, se via muitas vezes dividido quando se tratava de ações nas ruas, isso porque, esses momentos produziam encontros de diversos núcleos de insatisfeitos: pregadores de ideias libertárias, imigrantes frustrados, pequenos proprietários urbanos falidos, operários descontentes com os salários e pessoas disposta a transgredir os direitos e deveres estabelecidos por meio de ações violentas contra o patrimônio público e privado. Entre essas pessoas se encontravam anarquistas revolucionários e a “ralé”, identificada aqui como pessoas marginalizadas que roubavam, matavam e assaltavam e que não tinham vínculos com os movimentos populares organizados. A ação repressiva do estado aqui se dava também de forma violenta e justificada pelos supostos ataques “selvagens” (Rolnik, 1994).

A correlação de forças, que incluem a discussão sobre a propriedade privada, culminou no enfraquecimento das pautas anarquistas. Após a greve geral de 1917, na disputa de imaginários sobre as formas de lutas políticas soma-se o discurso da valorização da mão de obra operária. As vagas operárias, em especial a partir da década de 30, passam a ser ocupadas por migrantes que chegam à São Paulo e se instalam nas periferias. Da mesma forma, as zonas populares de cortiços da região central são deslocadas para a periferia e esses espaços passam a abrigar uma então emergente classe média de pequenos proprietários imigrantes (Rolnik, 1994).

As ligas populares/operárias da década de vinte e seu caráter anarquista somado às características da Primeira República, com suas ações políticas voltadas aos interesses das oligarquias cafeeiras, constituíram um cenário para que as lutas populares tivessem um caráter autonomista, no qual o Estado não representava um alvo de reivindicações. As mudanças no cenário político pós Revolução de 30 transformam esse cenário de lutas, trazendo o Estado para a centralidade das reivindicações populares (Bonduki, 1994).

Os grupos participantes do poder no pós Revolução de 30, não formavam uma base forte de sustentação ao governo Vargas. Essa sustentação foi então construída com as massas populares urbanas. A centralidade econômica, antes voltada às atividades agroexportadoras, se volta às atividades urbano-industriais e o Estado passa a ter



função central na reprodução da força de trabalho instituindo medidas como implantação de instituto de Aposentadoria e Previdência social, instituição de legislação trabalhista e criação de sindicatos oficiais. Da mesma forma, o Estado também instaura medidas habitacionais como a criação de financiamentos, a lei do Inquilinato e os loteamentos populares (Bonduki, 1994).

As práticas clientelistas e as medidas populistas desenvolvidas na relação entre o Estado e a sociedade civil organizada constituíram um cenário de suporte político, também sustentado na década de quarenta. A distribuição das casas dos programas habitacionais e as medidas de congelamento de aluguéis que ocorreram entre 1942 e 1964 fortaleciam o papel intervencionista do Estado. Tal papel, no entanto, ao mesmo tempo que construía uma imagem de protetor dos trabalhadores criava mecanismos legais de intervenção que agudizavam a crise da habitação, o que culminou no fenômeno dos despejos (Bonduki, 1994).

A presença do Estado na resolução da vida cotidiana do trabalhador ficou cada vez mais evidente e, as mobilizações populares do período, quase todas referentes à questão dos despejos, reforçavam essa presença à medida que colocavam o Estado como responsável pela resolução das reivindicações. Nesse período vale ainda destacar a importância do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que atuou legalmente entre os anos de 1945 e 1947, defendendo as pautas populares nos canais institucionais do Legislativo e do Executivo. Por meio dos organismos de trabalho de base - os Comitês Democráticos Populares, os comunistas do PCB disseminavam a perspectiva política de tomada e fortalecimento do Estado, desempenhando ações que iam de encontro à responsabilização deste pelas demandas populares. Tal perspectiva, ao mesmo tempo que pressionava o Estado o legitimava como lugar de regulação das questões urbanas e de trabalho (Bonduki, 1994).

As lutas populares da década de 50 e 60 foram marcadas pela presença das Sociedades de Amigos de Bairros - espaços autonomistas e que buscavam reivindicar maior participação nas decisões políticas municipais. As pautas centrais trazidas eram as de melhorias nas condições dos bairros, instalações de equipamentos sociais/serviços públicos e, em alguns casos específicos, chegaram a constituir movimentos por autonomia municipal (Camargo et al, 1976).

Nesse período também é estabelecida uma nova forma de organização municipal com a criação das Administrações Regionais. Este cenário aproxima as Associações de Bairro dos poderes administrativos e cria um ambiente propício à política de clientela na



qual a distribuição de benefícios governamentais está mais presente em detrimento de uma real influência política nas decisões e planejamentos globais da cidade (Camargo et al, 1976).

O distanciamento entre as bases populares e as decisões políticas centrais ficaram ainda maiores após o golpe militar em 1964. Este evento, no entanto, não impediu que novos núcleos de resistência fossem abertos com a rearticulação de organizações populares, agora norteadas por princípios que rejeitavam as práticas clientelistas e de submissão ao Estado (Bonduk e Kowarick, 1994).

Os Novos Movimentos Sociais urbanos: Sindicalismo e movimento de bairro

A transição entre os anos 60 e 70 foi acompanhada por fenômenos na relação Estado-sociedade que constituíram um cenário importante para a emergência de Novos Movimentos Sociais ao longo da década de 70 e 80.

Se por um lado a década de 60 foi marcada pelo aumento da repressão decorrente do regime ditatorial militar, por outro foi cenário de importantes mudanças em relação aos movimentos sociais urbanos.

Moisés (1982) ao analisar o movimento sindical na década de 70 e 80 destaca aspectos de um “Novo Sindicalismo” que para ele emergiu da necessidade de sobrevivência do próprio movimento social ou de massas. As características presentes nesse “novo sindicalismo” contrapunham as características presentes na década de 50 e início da década de 60 onde havia forte intervenção Estatal, com mecanismos cooperativos de controle. Segundo o autor, o “sindicalismo político” presente até a década de 60 era eficaz em pressionar demandas e forçar a ampliação de bases de apoio ao Estado, desempenhando um papel de coparticipe na definição das políticas de desenvolvimento nacional. Para o autor, no entanto, isso não significou uma permeabilidade dos anseios reais de participação da massa dos trabalhadores já que os sindicatos possuíam um processo democrático interno precário, com organização vertical entre as direções e as bases de trabalhadores.

Nesse sentido, pautas de interesse geral de classes dominantes como a do desenvolvimento industrial/comercial nacional sobrepunham os interesses específicos de fortalecimento da “cidadania regulada” dos trabalhadores. Ao mesmo tempo as pautas sindicais apontavam para conquistas específicas da relação entre patrões e empregados e deixavam as reivindicações sociais amplas em segundo plano, criando



um ciclo que para o autor enseja a debilidade do movimento operário e sua permeabilidade em face às investidas do autoritarismo.

As décadas que se seguiram, no entanto, presenciaram a ascensão de um sindicalismo de massas, amplamente representativo e que colocava em questão a própria política de encapsulamento da sociedade pelo Estado. Esses novos sindicalismos, segundo Moisés (1982), estavam com funções restringidas pelos governos autoritários e por isso tenderam a assumir debates sócio-políticos, com reivindicações sociais amplas, necessárias inclusive para que fosse possível levar adiante as demandas específicas das categorias representadas. Os espaços dos sindicatos começaram então a se caracterizar como movimentos de massa e que naquele momento histórico se inter cruzaram com os partidos políticos no cotidiano de luta dos trabalhadores. A distinção entre a face corporativa e política presente nos sindicatos apareceu como um caminho inevitável diante de pautas que mais apresentavam alternativas ao Estado do que o colocavam em questão.

Assim como nos sindicatos, na transição entre os anos 60 e 70, os movimentos de bairro paulistas também experimentaram importantes transformações. Nas periferias, as Sociedades de Amigos de Bairro (SAB) se apresentavam como elo de ligação entre a população carente de serviços básicos e o poder público. Na década de 50 tais associações se polarizavam ao redor de reivindicações locais de serviços urbanos com capacidade de união de massas de consumidores da periferia em mobilizações metropolitanas e até nacionais. Ao longo da década de 50 esses espaços passam a ser cada vez mais reconhecidos como órgãos de representação junto aos poderes públicos para reivindicação de benefícios em troca de apoio político. Ao longo da década de 60, as Sociedades de Amigos de Bairro foram se edificando como redes de apoio e lealdade política ao mesmo tempo que crescia sua incapacidade de responder aos anseios e necessidades das populações mais pobres (Singer, 1982a).

Para Singer (1982a, 1982b), no processo de compreensão das SAB é preciso considerar alguns elementos como: a institucionalização dos movimentos de bairro e o clientelismo desenvolvido nas SAB, que após o golpe militar passa a conferir limitações ainda maiores aos poderes reivindicatórios da população; as contradições de classe presentes nesses espaços que eram, geralmente liderados por moradores pertencentes à classe média e com defesa privatista de melhorias para os bairros; e por fim o caráter associativo muitas vezes assumido pelas SAB precedendo seu caráter reivindicatório. Assim, formas solidárias assistenciais como atividades de arrecadação de donativos em



forma de medicamentos, roupas e alimentos entre os moradores conviviam, ou antecederiam, o caráter reivindicatório de benfeitorias e serviços que não poderiam ser alcançados somente pela ação solidária.

Estas características, para Singer (1982a), explicam o afastamento da base popular e reivindicatória dos espaços das SAB e ajudam a compreender o crescimento e o surgimento de novas modalidades de organização popular nos bairros, inspiradas pelas Comunidades Eclesiais de Bases da Igreja Católica (CEB). Segundo o autor, a sociabilidade desenvolvida nas CEBs tinha forte caráter comunitário e de certa forma negava o caráter competitivo presente nas relações capitalistas. Caráter esse que buscava justificar as desigualdades sociais responsabilizando individualmente os pobres pela sua condição de pobreza.

A novidade apresentada aqui por Singer é a constatação de que as organizações, as formas de discussão e os conteúdos ideológicos presentes nas CEBs trazem um novo marco para o movimento de bairro. Diferentemente dos movimentos anteriores, que supunham que as carências dos bairros periféricos e da população se deviam a negligências dos governos (portanto superáveis por meio de investimentos do governo), o novo marco ideológico atribui essas carências à própria organização social capitalista. O resultado disso é o surgimento de mobilizações de bairro com reivindicações já habituais (por serviços urbanos básicos como transporte, saneamento e assistência a saúde) e novas bandeiras de luta em torno de objetivos e temáticas mais abrangentes como dos loteamentos clandestinos, do custo de vida e de direitos humanos.

O Movimento urbano por saúde

Os movimentos urbanos por Saúde já eram bastante expressivos na capital paulista no final da década de 70 e se articulavam nacionalmente por meio dos Encontros Nacionais de Experiências em Medicina Comunitária.

A ligação dos movimentos de Saúde com a Igreja Católica é retratado por Doimo (1995) e por Bogus (1998).

Ao retratar a relação entre as pastorais da Igreja e os movimentos da Saúde Doimo (1995) atribui a essa relação a presença de um caráter assistencialista e comunitarista, inspirado em métodos naturalistas, plantas medicinais e remédios caseiros. Para a autora, no entanto, é também a partir dos espaços mobilizados pela Igreja Católica, nos bairros, que se dá a interação com profissionais e entidades da área da saúde (estudantes, médicos – principalmente sanitaristas- e servidores) e considera que essa



interação incorpora no movimento o discurso do direito e da cidadania. Esses encontros, para a autora, imprimiram a presença de duas forças no movimento da saúde nos anos 80: o Movimento da Reforma Sanitária, privilegiando a ação institucional, e o Movimento Popular de Saúde (MOPS), privilegiando a organização de redes locais com práticas autônomas e independentes. O MOPS passa a ter grande abrangência territorial, perdendo gradativamente seu sentido comunitarista e desenvolvendo uma intensa relação com a esfera institucional. A relação do MOPS com as organizações não governamentais e com o Movimento da Reforma Sanitária, para a autora, explica a aproximação cada vez maior dos movimentos com as pautas de reforma da saúde para dentro do Estado.

Bogus (1998), ao estudar o Movimentos de Saúde da Zona Leste (MSZL), conclui que no processo de desvinculação gradativa entre movimento popular de saúde e as ações pastorais, o elemento primário não foi o encontro da população com os atores da Reforma Sanitária, mas sim a própria conclusão das mulheres envolvidas no movimento de que as ações assistencialistas e pontuais não repercutiam em mudanças significativa na vida dos moradores. A autora, no entanto, também atribui ao encontro entre estudantes e a população o desenvolvimento de conhecimento e de caminhos reflexivos que culminaram na organização do movimento por direito à saúde, para além dos encontros nas pastorais. Parte da população envolvida com os encontros da Igreja passaram a integrar comissões de saúde nos bairros junto com pessoas que não estavam ligadas a espaços da Igreja Católica. Além dos estudantes, a presença de Médicos Sanitaristas nesses outros espaços, segundo a autora, teve um papel relevante pela sua ação pedagógica. Cursos de prevenção e noções básicas de higiene colocaram a população em reflexão sobre suas condições de vida e moradia e de injustiça social, contribuindo para o crescimento das pautas reivindicatórias do movimento.

A pesquisa de Bogus revela ainda que as lideranças populares dos movimentos (no caso do MSZL, mulheres) se preocupavam em protagonizar as lutas, atribuindo as conquistas ao movimento e não a políticos que eventualmente se aproximavam das causas. As perspectivas de luta do movimento estudado eram de longo prazo e ultrapassavam a reivindicação simples de um Centro de Saúde para a Região. Não fica claro no estudo se as propostas reivindicatórias iam a fundo na análise do contexto social e/ou questionavam diretamente em suas pautas a organização social capitalista. Mas, segundo a autora, é possível dizer que o movimento em sua origem se organiza



em torno de reivindicações de infraestrutura básica de prestação de serviços de saúde e ao longo do tempo expande-se para reivindicações de espaços para influenciar diretamente na alocação de recursos financeiros (criação de conselhos locais de saúde) e na escolha do modelo assistencial de prestação de serviços.

No MSZL a discussão sobre o processo de institucionalização do movimento popular foi tema de debate para dentro do próprio movimento que se via preocupado com possíveis cooptações e perdas de autonomia. A presença dos Conselhos locais de Saúde traz esse tema à tona pois, ao mesmo tempo que se torna um espaço institucionalmente reconhecido pelo Estado, foi um espaço reivindicado e criado pelo próprio movimento e com atividades que procurassem manter um canal de interlocução com a população para que suas ações fossem orientadas a partir das demandas populares (Bogus, 1998).

A relação entre movimento popular e Estado é também analisado no estudo de Doimo (1995) sobre a história do Movimento Popular de Saúde (MOPS). A autora apresenta duas perspectivas distintas de análise: por um lado há a preocupação com a contaminação de movimentos populares pelos males da institucionalidade política, por outro há uma avaliação de que a aproximação com o Estado representa uma fase mais propositiva do movimento e poderia significar um salto de qualidade para o mesmo.

Movimentos sociais contemporâneos

Os estudos sobre as lutas populares mostram que tanto no contexto brasileiro como mundial os movimentos sociais apresentam mudanças significativas de pautas e modos de luta desde a década de 70.

Os movimentos sociais na década de setenta e oitenta no Brasil foram marcados por um caráter fragmentado que segundo Sader (1988), pode ser explicado pela diversidade das condições objetivas em que emergem. A heterogeneidade social presente nos espaços urbanos é uma das explicações trazidas pelo autor para a emergência de manifestações tão diversas. Tal heterogeneidade já era presente na década anterior, no entanto, para o autor o discurso Estatal getulista ou o discurso comunista operado pelo PCB davam o tom das reivindicações. Os movimentos da década de setenta, por sua vez, constroem seu sentido por meio de diversas formas de expressão, não operadas por grupos discursivos específicos. O Regime Militar presente no país também contribuiu para tal situação, à medida que apartava as reivindicações populares dos espaços institucionais. Os movimentos sociais tiveram assim que construir sua identidade política (Sader, 1988).



Alana Moraes e Jean Tible (2015) ao entrevistarem movimentos sociais contemporâneos brasileiros fazem um esforço de reconhecer identidades comuns entre as lutas. Os autores leem a constituição dos movimentos sociais da década de 70 e 80 como uma forma de alargamento do espaço da política, rechaçando as formas tradicionalmente instituídas e produzindo uma herança para aos movimentos atuais. Os autores dialogam sobre uma geração que estaria imprimindo um novo ritmo político e uma nova leitura organizativa na qual há um desconforto com o lugar de representação revelando, na opinião dos autores, uma maior sensibilidade dos coletivos ao tema do “poder”. O dilema nessa constituição coletiva é apresentado pelo desafio de criação de mecanismos de pertencimento.

Petit (2009), em um esforço reflexivo sobre a vida política da atualidade, traz elementos que nos ajudam a refletir sobre um “novo sujeito político”. A derrota da ideia de revolução por meio da classe trabalhadora e a compressão do capitalismo como única realidade vivida hoje são pontos de partida utilizadas pelo autor para pensar um sujeito político que não tem mais como identidade coletiva a classe trabalhadora. Assumir a crise desse sujeito fundado na ideia de classes, para o autor, é passo importante para compreensão de uma sociedade cujas resistências ao poder não cabem na dicotomia trabalhador-donos dos meios de produção, já que a própria vida parece se constituir como forma de domínio. Nesse sentido a análise crítica volta-se para a realidade vivida, para a compreensão de uma convivência inteiramente capitalista. Para Petit os movimentos sociais, a partir da década de 70 se desarticulam como coletivo mediante uma *“complexa engenharia social que passará pela descentralização produtiva, pela flexibilização do mercado e pelas inovações tecnológicas”* (Petit, 2009, p. 232). Inaugura-se então o “Eu” oportunista e medroso, um “Eu” sobrevivente das reconfigurações econômicas do capitalismo.

Gerschman (1997), escrevendo sobre o tema das lutas autônomas e movimentos sociais dos anos 70, diz que parte importante das mobilizações colocou em questão a globalização neoliberal e a democracia. A autora aponta para a mudança cultural de conteúdos desses movimentos a partir da década de 80 que passam a localizar a problemática societária na discriminação das minorias. As sociedades começam a ser formadas por tribos diferenciadas e um mosaico de identidades com demandas sociais pautadas no reconhecimento das minorias. Segunda a autora essa situação colaborou para a fragmentação da sociedade que já vivia uma crise democrática de exclusão endossada pelo Estado.



Essa ideia de reconhecimento suplantando os interesses de classe encontra eco na discussão desenvolvida por Nancy Fraser (2003, 2016) sobre os conflitos políticos de grupos mobilizados no final do século XX. A autora nos indica que a pauta do reconhecimento tem suplantado ou mesmo extinguido as pautas por redistribuição econômica igualitária tão presente nas discussões sobre luta de classes. O conflito decorrente dessa mudança de paradigma nas lutas sociais é analisado por Fraser que dedica sua reflexão às confluências possíveis presentes nas pautas de reconhecimento e nas pautas de redistribuição para a superação das injustiças sociais, deflagrando uma falsa antítese decorrente de tal conflito. Para exemplificar essa composição, apresenta a temática de gênero e raça como exemplos de status social que compõem subordinações culturais e econômicas, inspirando lutas que reivindicariam transformações nos dois aspectos.

A partir das leituras dos autores que se dedicaram a compreender os movimentos sociais desde a década de 70 é possível observar continuidades e descontinuidades de pautas e modos de luta. A pesquisa que se seguirá a partir da investigação aqui apresentada estará atenta às análises trazidas nesse texto, olhando para a pauta da saúde nos movimentos de moradia de São Paulo e buscando linhas de conexão com a história das lutas na cidade.

Conclusões

As lutas urbanas paulistas por direitos sociais desde a década de 1920 conjugavam pautas advindas dos problemas de moradia/ocupação urbana e da ausência de direitos sociais básicos como saúde e educação. Ao longo das décadas, o desenvolvimento de espaços de luta como os Movimentos de Bairro e os Sindicatos resultou em elos entre a população e o poder público desencadeando temáticas conflituosas como as práticas clientelistas, a distância entre as bases populares e as decisões políticas estruturais e a relação entre pautas particulares/locais como acesso a um serviço, e pautas amplas de questionamento da organização social capitalista.

Na capital paulista o movimento urbano por saúde acompanha esse processo se constituindo a partir dos Movimentos de Bairro e como características desse movimento são apontadas a transição das práticas autônomas de cuidado comunitário em saúde para pautas estruturais e reivindicatórias de serviços públicos. A participação de profissionais da saúde, sanitaristas e estudantes nas comunidades e movimentos é apontada como ponto de influência na construção de pautas reivindicatórias mais estruturais em detrimento das pautas de cuidado geridas pela comunidade. Aqui a



temática da institucionalização do movimento comunitário aparece como ponto de conflito ao mesmo tempo em que são constituídos os Conselhos Locais e Municipais de Saúde.

As características presentes nos movimentos sociais contemporâneas e apresentadas no texto parecem dialogar com os aspectos conflituivos presentes nos movimentos sociais anteriores à década de 70. A radicalização da autonomia dos movimentos e o questionamento da representatividade democrática parece ser uma pauta que emerge junto com o desenvolvimento das lutas urbanas na capital.

No campo da saúde esse tema parece ser especialmente sensível à medida que a conquista do Sistema Único de Saúde esteve vinculada ao processo de institucionalização da participação social por meio dos Conselhos de Saúde.

Referências bibliográficas

Bogus, C.M. (1988). *Participação Popular em Saúde: formação Política e desenvolvimento*. São Paulo, Brasil: Annablume: FAPESP.

Bonduki, N. (1994). Crise de habitação e moradia no pós-guerra. En: Kowarick, Lúcio (Ed.), *As lutas sociais e a cidade: São Paulo passado e presente*. Rio de Janeiro, Brasil: Paz e Terra.

Bonduki, N. y Kowarick, L. (1994). Espaço urbano e espaço político: do populismo à redemocratização. En: Kowarick, Lúcio (Ed.), *As lutas sociais e a cidade: São Paulo passado e presente*. Rio de Janeiro, Brasil: Paz e Terra.

Camargo, C.P.F. y otros (1976). *São Paulo 1975: crescimento e pobreza*. São Paulo, Brasil: Loyola.

Camargo, C.P.F., Souza, B.M. y Pierucci, A.F.O. (1982). Comunidades Eclesiais de Base. En: Singer, P. y Brant, V.C. (Ed.). *São Paulo: O povo em Movimento* (pp.59-81). Petrópolis, Brasil: Editora Vozes.

Doimo, A.M. (1995). *A vez e a voz do Popular: movimentos sociais e participação política no Brasil pós 70*. Rio de Janeiro, Brasil: Relime Dumará: AMPOCS.

Fraser, N. (2016). Da redistribuição ao Reconhecimento? Dilemas da justiça numa era “pós –socialista”. *Cadernos de campo*, n(14/15), 1-382. Recuperado de: <https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/viewFile/50109/54229>.

Fraser, N. (2003). *Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition and Participation*. En: Fraser, N. y Honneth, A. (Ed.). *Redistribution or Recognition: A political, philosophical exchange*. London- New York, Inglaterra-EUA: Verso.



Gerschman, S. (1997). Democracia, políticas sociais e globalização: relações em revisão. En: Gerschman, S. y Vianna, MLW. (Ed.). A miragem da pós-modernidade: democracia e políticas sociais no contexto da globalização. (pp. 53-64) Rio de Janeiro, Brasil: Editora FIOCRUZ.

Moisés, J.A y otros (1982.). Alternativas populares da Democracia: Brasil, anos 80. Petrópolis, Brasil: Vozes.

Moraes, A. y Tible, J. (2015). Introdução: Quando novos personagens entram em cena? En: Alana Moraes, A.; Tarin, B.; Tible, J. (Ed.). Cartografias da Emergência: Novas Lutas no Brasil. (pp.15-39). São Paulo, Brasil: Fundação Friedrich Ebert Stiftung.

Petit, S.L. (2009) ¿Qué es hoy una vida política? En: Rolnik, S. y otros. Conversaciones en el Impasse: dilemas políticos del presente. (pp. 217-234). Colectivo Situaciones: 1ª ed. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón.

Rolnik, R. (1994). São Paulo, início da industrialização: o espaço e a política. En: Kowarick, L. (Ed.). As lutas sociais e a cidade: São Paulo passado e presente. (pp. 95-110). Rio de Janeiro, Brasil: Paz e Terra.

Sader, E. (1988). Quando novos atores entrem em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo (1970-80). São Paulo, Brasil: Editora Paz e Terra.

Singer, P. (1982a). Movimentos de Bairro. En: Singer, P. y Brant, V.C. (Ed.). São Paulo: O povo em Movimento. (pp.83-108). Petrópolis, Brasil: Editora Vozes.

Singer, P. (1982b). Movimentos sociais em São Paulo: traços comuns e perspectivas. En: Singer, P. y Brant, V.C. (Ed.). São Paulo: O povo em Movimento. (pp. 207-230). Petrópolis, Brasil: Editora Vozes.



Las reconfiguraciones socioespaciales en la región andinoamazónica del Perú.

Leandro Bonecini de Almeida

Resumen

Los pueblos indígenas amazónicos en el presente momento están ubicados en una de las fronteras de colonización del continente, se enfrentan a mineros ilegales y/o artesanales, a las presas hidroeléctricas, oleoductos, a la extracción de petróleo y gas, u otras actividades económicas extractivas que hacen de este espacio área densa y focal de la conflictividad contemporánea en América Latina. Los conflictos mineros y de los hidrocarburos pueden ser analizados desde sus implicaciones directa y indirectas, pero se plasman en la realidad sobreponiéndose a otras actividades productivas y de reproducción social. Reaccionan los pueblos generando dinámicas organizativas autónomas, asumiendo la toma de decisiones sobre las tierra y territorios, sobretodo frente a los estados nacionales, poderes económicos nacionales y transnacionales. Por lo tanto, nos provocan a investigar las razones históricas, las transformaciones en largas duraciones y distintas temporalidades que resultan en los marcos espacio-temporales que señalan conflictos civilizatorios, epistémicos e cosmológicos entre culturas, etnias, pueblos, naciones.

A fines de 2015 se hace público el Estatuto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) al norte de la Amazonía peruana. La convergencia entre el lenguaje hegemónico de los códigos del Estado Moderno y aquellos de la cosmología Wampis se dan en contextos de múltiples y variados conflictos históricos, nos presentan cuestiones acerca de las relaciones entre diferentes mundos.

Palabras clave

Amazonías; Autonomías indígenas; Extractivismos.

Introducción

Las realidades amazónicas son de gran complejidad, sea por los contextos locales, regionales o nacionales o mismo transnacionales. Entre la frontera y la cultura la colonialidad contemporánea de la amazonía se transforma según los balances de fuerzas asimétricos de la capacidad de apropiación social de la naturaleza. En el Perú del presente hay herencias, marcas, acumulaciones de fenómenos y tiempos históricos



de diversas duraciones sobre aquellos elementos que nos permiten entender la relación entre lo local y la humanidad.

Todavía está pendiente un análisis amplio de la relación profunda entre los Andes y la Amazonía en el Perú, y más allá, considerados el continente sulamericano. La regionalización es parte de la vinculación y identidad, consciente o no, sobre un territorio. Sea este más real o legítimo, lo que resulta evidente es la gran variedad de experiencias sociales entre estos “dos” ecosistemas. La frontera norte del Perú, disputada por medio de guerras con Ecuador es una evidente muestra de la cómo la disponibilización de tierras es parte del proceso metabólico de la razón estado-céntrica de garantía de reservas de valor.

Se trata de entender la corporalidad de la territorialización de agencias en la Amazonía: sea de la expansión de la minería ilegal; los proyectos de construcción de carreteras, presas hidroeléctricas, oleoductos, bloques de petróleo, tala de bosques. Son prácticas que interseccionan agentes de horizontes de posibilidad y futuro antagónicos. La convergencia entre el lenguaje hegemónico de los códigos del Estado Moderno y aquellos de las cosmologías indígenas se dan en contextos de múltiples y variados conflictos históricos, de las relaciones entre diferentes mundos: “la maléfica sombra proyectada desde atrás por una forma de civilización que en un momento de su historia se siente obligada, endógenamente, a extender la competencia de sus economías antagónicas a escala mundial” (Césaire, 2006, p.14). A partir de la Ley de Comunidades Nativas de 1974 ocurre la demarcación de “comunidades nativas” y “reservas comunales”, lo que ordenó relativamente la ocupación de colonos y empresas (Garra y Gala, 2014).

Las políticas indigenistas como la Ley de Comunidades Nativas representaban cierta artificialidad a la integralidad de la territorialidad indígena, y por ello insuficiente para garantizar los derechos de los pueblos amazónicos, sobretodo en las oleadas expansivas de los capitales la etapa neoliberal del tiempo presente. Este marco legal reconoce nada más el derecho a la superficie, excluyen los cuerpos hídricos, fauna, el bosque, subsuelo, espacios vitales fundamentales en la cosmología de la integralidad de los territorios. Los Wampis - conocidos por su tradición guerrera – fueron involucrados en las guerras fronterizas entre Perú y Ecuador, a la vez soportaron y resistieron al Estado de Emergencia, la militarización tras el Masacre de Bagua o el Baguazo, en su milenaria historia reinventan sus prácticas para seguir existiendo,



manejan éticas y morales de su propia filosofía política, división social de trabajo, vínculos que le hacen sociedad.

Un gobierno indígena surge en la Amazonía peruana ¿Sabrán los ciudadanos ubicados en Lima de su existencia? ¿O de los retos y obstáculos para su existencia en los procesos históricos de conflictos en la Amazonía? La existencia social de esta experiencia no se puede medir desde los conocimientos y saberes colonizados en los centros y el Norte de poder, sobretodo en términos de la nacionalidad y el estatuto del ciudadanía, de las razones de Estado y del Capital: “Que sólo Occidente sabe pensar; que en los límites del mundo occidental comienza el tenebroso reino del pensamiento primitivo, el cual, dominado por la noción de participación, incapaz de lógica, es el prototipo mismo del falso pensamiento”(Césaire, 2006, p.37).

Fundamentación del problema

El problema en cuestión son las transformaciones ocurridas en los últimos 50 años en las amazonías peruanas, sobretodo aquellas cercanas a la ceja de selva al norte del país. De la decadencia de la actividad cauchera y las misiones cristianas que la acompañaban, la entrada de las iglesias evangélicas y el inicio de las actividades de explotación de petróleo, son cambios radicales.

Se trata de comprender cómo hay movimientos sincrónicos en el continente y en el mundo, hay rupturas con los marcos legales de los países latinoamericanos durante las dictaduras, marcos jurídicos de las jóvenes democracias republicanas, así como de las instituciones políticas paraestatales que ocuparán la amazonía en oleadas de fiebre por modernización y desarrollo.

No hay indicios de que las ofensivas cesarán, aunque las hegemonías externas cambien, sean otros imperios o potencias industriales-financieras. Hay que considerar la formación socio-cultural, histórica y geográfica extremadamente diversa de las amazonías. Tal postura no ayudará, aunque empezando este trabajo de manera localizada, mantener la coherencia metodológica de ampliación gradual de escalas analíticas. Empíricamente, los casi 60 años de explotación petrolera y de la minería en la amazonia peruana, sobretodo en territorios “indígenas” nos señalan preocupaciones con la amazonia en territorios brasileños, dados los agentes reaccionarios del gobierno actual, herederos de dictaduras y afines a grupos paramilitares.

Las etnias ven la unidad de sus opresores en la preparación de los ejércitos nacionales que van a las escuelas metropolitanas, que reciben el entrenamiento de sus expertos



para usar las armas que esos países les venden a los ricos y poderosos del propio país o provincia donde viven. Descubren cómo esa unidad se extiende a los paramilitares nativos que reciben entrenamiento y armamento de caciques, gobiernos nacionales y extranjeros, hasta formar verdaderos complejos transnacionales, con sus jerarquías y autonomías relativas, convencionales y no convencionales. (González-Casanova, 2003, pp. 24-25).

La amazonía es la base material para la reproducción ampliada, fuente de matrices energéticas y materias fundamentales para la industria y el sistema financiero mundial. Es objeto de especulación de la conservación, del patrimonio de la humanidad eurocentrada, de la sostenibilidad retórica de las responsabilidades sociales empresariales. Es una cuenca de cuencas hídricas en un futuro de crisis de acceso al agua en el mundo. Pero es también territorio integral de múltiples naciones. Esta otredad es fundamental en la integralidad del territorio, las relaciones con los seres humanos y no humanos, orientan el sujeto político y el poder, las prácticas de frontera, autonomía y alianzas dadas las relaciones crecientes con el Estado y el capitalismo global, según Garra y Gala (2014). La identidad Wampis está fuertemente vinculada a las cuencas de los Ríos Kanus (Santiago), Kankaim (Morona), entre otros cursos de agua, ríos, cochas, ecosistemas y nichos ecológicos diversos, suelos, cerros, cuevas, bosques, fauna, aire, paisajes, subsuelo, quebradas, nacientes, y otras formaciones naturales apropiadas y significadas socialmente como parte de su identidad y espiritualidad determinante de su filosofía política y cultura que durante siglos convive con este territorio y la Amazonía conocida por el occidente sobretodo desde su exterior.

Según Garra y Gala (2014), las relaciones étnicas de parentesco se distribuyen geográficamente en estos cuerpos hídricos, cerros, sitios animados por espíritus, marcos espacio-temporales de las alianzas y guerras entre wampis, awajún, y shuar, pueblos indígenas jíbaros, según los cuales habitan junto a una gran cantidad de seres no humanos, ontologicamente personificados (aents), compartiendo calidades, habilidades y virtudes, siendo traducibles como almas (wakan).

Se expresan en muchas frentes de resistencia los intentos de hacer eco a la emergencia por detener la explotación privada de recursos, commodities y reservas de valor, para lograr tener algún futuro distinto de la muerte y el sufrimiento. Los conflictos mineros y de los hidrocarburos pueden ser analizados desde sus implicaciones directa y indirectas, pero se plasman en la realidad sobreponiéndose a otras actividades productivas y de reproducción social. Nos evidencia la cadena compleja de la explotación de la materia-



energía, su circulación, realización como mercancía y aporte en capital, su procesamiento-transformación y circulación.

La hibridación entre estado-nacional y empresa capitalista, especialmente en el ámbito de la expansión geográfica del capitalismo, diseña un sistema integral de dominación, conforme propuesto por Machado Aráoz (2013); apunta también a la emancipación/dominación de espectro completo (Ceceña, 2013); o, como propone Bebbington (2011), espacios "sitiados", pues en grandes zonas del continente los pueblos y el medio ambiente están siendo presionados por todos lados.

En esta perspectiva, las empresas de la minería y las matrices energéticas, en su proceso de internacionalización y transnacionalización, están orientadas por una lógica o Razón de Estado (Aráoz, 2013), mientras para Swyngedouw (2010, p.63) "la inserción de firmas en una densa red de entornos privados de producción regional forma parte de una estrategia de globalización e integración global". Desde el punto de vista geopolítico de la región, un sexto de toda el agua dulce del planeta corre en la cuenca amazónica (Porto-Gonçalves, 2015, p.70-71), formada desde los ciclos hidrológicos de las cuencas, las lagunas, páramos y manantiales andinos. La Amazonía también alberga yacimientos minerales entre los más importantes del planeta. Considerando las sobredeterminaciones de lo global sobre el local, en la dimensión de las rupturas se presentan nuevas posibilidades de presencia y coexistencia, pues "en los lugares se busca furiosamente la libertad" (Souza, 2013, p.177). O como sugiere Ullloa (2014), es a partir de las prácticas y lógicas locales que se construyen defensas al extractivismo y opciones de futuro, por la autodeterminación y autonomía concretas de los pueblos indígenas y campesinos. La geopolítica, para Ullloa y Göbel (2014, pp.18-19), está también en las similitudes entre experiencias locales y prácticas diarias en diferentes partes de América Latina.

Metodología

La metodología en esta investigación es parte fundamental del análisis, o sea, es también objeto de reflexión, sea por su capacidad explicativa, sino por la capacidad de comunicación y efecto que genere determinado conocimiento. Se permitió significativa experimentación, respetadas las limitaciones concretas y técnicas que se nos podrán imponer. Tal búsqueda metodológica, en verdad, tiene que ver con la relación con las demandas y necesidades de los pueblos amazónicos, quienes son profundamente afectados por los cambios radicales en sus territorios.



Por lo tanto, no se trata del privilegio de la realización de un proyecto individualmente, limitado al plazo de una publicación. El método como forma nos da un ritmo y duración. O sea, los métodos se alteran según las realidades y los medios para conocerla, son parte de la investigación, elaborados por y para este trabajo.

En esta investigación hay algunas líneas metodológicas desarrolladas según los trabajos realizados en relación con las territorialidades amazónicas. Son los siguientes: a) el imagen, consideradas las aportaciones de la antropología, el cinema, la fotografía y otras ciencias; b) la estadística, y por medio de ella la creación de bases de datos, las cuales vinculan datos obtenidos por encuestas o surveys.

La primera se refiere a la posibilidad de contribución a las capacidades internas y externas de comunicación de los territorios amazónicos en contextos de conflictos. La imagen es un mensaje, una mirada, lenguaje poético y político, no solo visual sino medio de acceder a los sentidos, emociones y razones. La elaboración de las narrativas es un elemento importante en la capacidad de territorialización, de establecer consenso para vivir bien o para la guerra. Así, la comunicación comunitaria, interétnica e internacional se desarrolla cómo eje elemental para la capacidad de comprensión del escenario andino amazónico en el Perú. Para el trabajo de campo, se considera la utilización del registro de imagen: la memoria, luego traducida a dibujos para futuro tratamiento digital; además de fotografía y video; registro de sonidos inspirados por el método de cartografías sonoras, entrevistas, relatos y historias de vida, lo que nos lleva al segundo eje metodológico.

El otro método en construcción en esta investigación en curso es el desarrollo de plataformas de manejo de datos estadísticos y análisis que puedan operar, de acuerdo a los principios y desarrollos buscados por las territorialidades. Tal necesidad surge cuando es grave la divergencia entre los agentes de las capas de territorialidades en conflicto, los cuales manejan de manera asimétrica volúmenes y calidades de datos. Por ello, la soberanía sobre las informaciones puede generar una interpretación menos autoritaria por investigador ajeno. Se elaboró un primer formato para la realización de un censo autónomo, además de propuestas de la capacitación de empadronadores, comunicadores y monitores ambientales para recolectar y organizar los datos.

Por lo tanto, el método surge como teoría y práctica relacional según las percepciones de la realidad encontradas en los diálogos y las redes conocidas para alcanzar la posibilidad de acceder a los territorios. En muchos casos se discute la naturaleza de la investigación, sobretodo en términos de cuales son su relevancia y objetivos



compartidos sea con el corpus intelectual ampliado dedicado a tales cuestiones, sean académicos o no. En ese tema consideramos tal intelectualidad como toda persona con la intención, acción y pensamiento dedicado al entendimiento de la realidad que le corresponde.

Puede parecer indeterminado, pero el campo puede significar una serie de tareas, en la ruta por caminar en el proceso de investigar. Así, esta investigación en curso conlleva experiencias de adaptación, de adecuación, sobretodo en términos de la aplicación de conjuntos dispersos de habilidades y técnicas para atender, la muy razonable, expectativa de los agentes en general objetificados por las investigaciones. Entre ellas, está la organización y realización de oficinas de (auto)capacitación de comunicadores comunitarios, lo cuales además son jóvenes liderazgos en territorios amazónicos. Es la entrada para ampliar confianzas, compromisos y trabajos.

Otra entrada inesperada, pero metodológicamente sorprendente, sino recomendable: buscar en todas las universidades archivos e investigaciones sobre el tema de investigación. Podrá surgir un archivo no procesado, informaciones importantes, aunque en idiomas no occidentales. Un cura misionero podrá haber registrado cientos de horas de grabaciones de audios en las mismas comunidades que recién hayas conocido. De ahí, se concluye que la metodología, no es solo una herramienta, sino parte de la misma investigación, y además, si considerada de manera creativa permite el cruce de prácticas de interpretación, expresión y lenguaje. El conjunto de estos accionares metodológicos se representará temporalmente de manera gráfica cómo parte de demostración del proceso de conocimiento, así como la interacción con los medios audiovisuales y datos georeferenciados.

Resultados y discusión

La presente investigación está en curso, los resultados son preliminares, como no podrían dejar de ser. Tras meses de contactos, intermediaciones, negociaciones estamos avanzando rumbo a la realización de las acciones mencionadas en el apartado metodológico, lo que servirá cómo prueba de los modelos y proyectos, además de la capacidad de desplazamiento en el territorio amazónico.

La frontera norte andino amazónica del Perú - la cual comprende las regiones Cajamarca, Amazonas y Loreto – está poblada hace decenas de siglos por poblaciones más recientemente llamadas “indígenas” las cuales están en un proceso original de organización. Las cultural wampis, awajún, shuar y achuar de la familia jíbara; además de los pueblos de las Cuatro Cuencas, y los respectivas cuencas, kandoshis y quechua



(Río Pastaza), achuar (Corrientes), kukama-kukamiria (Marañón), kichwa (Tigre). Los jíbaros están en tensión, incluso intercomunal.

Los primeros son afectados por el oleoducto norperuano, la proyección de presas hidroeléctricas en el el Río Marañón, por el lote petrolero 64 (Geopark y Petroperu), la construcción de la carretera conectando el sistema vial entre Ecuador y Peru, la minería ilegal, la tala de bosque, la contaminación del agua, las enfermedades transmisibles sexualmente, entre otros desafíos. Ya en las Cuatro Cuencas, el escenario del presente está centrado por los lotes de petróleo 192 - antiguo 1AB, antes operado por Pluspetrol y ahora Frontera Energy – muchos sitios impactados y contaminados, que afectan a los pueblos Achuar del Corrientes, Quechua del Pastaza y Kichwa del Tigre.

El resultado preliminar de la investigación está en conocer los rasgos generales de las narrativas de los agentes indígenas frente a los proyectos de desarrollo del Estado y de las empresas privadas. Entre los jíbaros una tendencia es la reivindicación a la autonomía y el gobierno de su propia nación, sea como sistema de control social con capacidad de determinar el desarrollo de un territorio. En las organizaciones de las Cuatro Cuencas, se nota en las campañas la exigencia de reparación a los graves crímenes ambientales y sociales sufridos, además del esfuerzo de negociar con representantes del Estado y empresas.

Las relaciones permisivas del Estado con las empresas extractivas nacionales, internacionales y/o transnacionales, sean legales o ilegales, mineras, petroleras, gasíferas u otras no están permitidas, del acceder al territorio sin que haya un proceso formal de consulta por parte del Estado. Es relevante reiterar las constantes fugas de petróleo en la Amazonía norte del Perú, así como la presencia de la minería ilegal, incluso en el territorio Wampis – lo que explicita las consecuencias del colonialismo y de la globalización hegemónica. Por ello, la población se ha dedicado de manera constante a la vigilancia, incluso a la expulsión de los mineros y la destrucción de sus máquinas. Es importante recordar la presencia colonial-imperial en la Amazonía, sobretodo de Estados Unidos, Inglaterra, entre otras naciones en su proceso de expansión, o sea, “el capital monopólico y el imperialismo se han combinado con el racismo y el colonialismo para explotar y oprimir a territorios que viven bajo un régimen colonial o neocolonial”. (González-Casanova, 2003, p.12). Además, Espinosa (2016) destaca el hecho de existir una lógica paternalista asistencialista (y eventualmente clientelística), en la que el gobierno se vincula con las comunidades indígenas a través de “regalos” (techos, botes,



grupos electrógenos o tractores) o fiestas (ferias artesanales, campeonatos deportivos, concursos de belleza o celebraciones conmemorativas) (Espinosa, 2016).

Por su vez, recién lo wampis estuvieran en la reunión de accionista de la petrolera Geopark, para decirles sobre su desacuerdo con el bloque 64. Así, el Estado aparece como institución ambivalente, criticada por su agencia estructuralmente violenta y ajena, pero se reconoce como ámbito estratégico de negociación, sea para reducir las acciones de las fuerzas dominantes, o como fuente de políticas públicas soporte para en el sistema educativo y de salud propios del Gobierno Wampis. Según Espinosa (2016) el Estado debería garantizar el soporte a los gobiernos locales y regionales la coordinación junto a las comunidades y organizaciones indígenas, teniendo capacidad de decisión y presupuesto adecuados para realizar sus actividades, respetadas las consultas y las autonomías hacia la valoración de la diversidad étnica y cultural para el cambio de mentalidad del conjunto de las y los ciudadanos del Perú. Caso contrario se trata de una burla o estafa, “al mismo tiempo se tiene que eliminar la discriminación y el racismo, y revertir la lógica paternalista-asistencialista que sigue manteniendo el Estado frente a las comunidades y organizaciones indígenas” (Espinosa, 2016, p.13).

Podemos destacar algunos conceptos cruciales para la interpretación del fenómeno en análisis: poder, colonialidad, la cuestión territorial y de las escalas. Las violencias históricas de exterminio, racialización e inferiorización (Quijano, 2012) de las diversidades que reivindican sus existencias, poblaciones que r-existen (Porto-Gonçalves, 2001). El fenómeno humano como éste se da por las diferencias construidas en relación al patrón de poder colonial (Quijano, 2005; Walsh, 2012) en todas las esferas de la vida: por la colonialidad de los ser, del poder y del saber; del posicionamiento/localización eurocéntrica; y la colonialidad cosmogónica (Walsh, 2012). Por lo tanto, la Amazonía no es un vacío, sea de conocimiento, sea demográfico que la colonialidad del saber y del poder determinen. Cuando llegaron los colonizadores ibéricos los indígenas de la región amazónica eran 3 millones y 780 mil, siendo la Amazonía habitada hace aproximadamente 11.200 años. La depopulación generada por la invasión colonial fue de tal orden que la población total de la Amazonía sólo vendría a alcanzar ese número en 1970. Por lo tanto, destruir el bosque es extinguir el enorme acervo de conocimiento que no está escrito, pero inscrito en las prácticas sociales que construyen saberes por una lógica material sobre una extensa selva tropical húmeda, con 8 millones de km² de extensión (Porto-Gonçalves, 2015).



Ante la pérdida del control de la capacidad de reproducción social de prácticas y de saberes, determinados grupos desaparecen o se resignifican en los territorios y sus múltiples relaciones de poder. La materialidad económico-política y las diversidades epistémicas inciden sobre la condición de (re)producción de la vida, de las formas de existir socialmente, y del poder simbólico de las relaciones: “el capitalismo está siempre sometido al impulso de acelerar el tiempo de rotación y la en el sentido de revolucionar los horizontes temporales del desarrollo” (Harvey, 2007, p.76).

La Amazonía es vista como reserva inagotable de recursos a disposición del desarrollo hegemónico, lo que ignora las relaciones humanas y entre seres no humanos, que insertados en lógicas diversas de la vida y de la naturaleza (Leff, 2006), contradicen los discursos de la normalidad, (des)órdenes establecidas, insinúan otras órdenes: el concepto de movimiento social también nos es caro para el análisis del fenómeno propuesto. Este concepto define en gran medida grupos sociales que se organizan alrededor de luchas por garantía de derechos y libertades, entendidas genéricamente como movimiento social: “el grado de su libertad no es constante, sino que es algo que se gana, se disputa y pierde, en un movimiento, algo que se disuelve siempre si no conquistado de nuevo como por primera vez” (Zavaleta, 2009, p.122).

Reflexiones finales

La coyuntura de las amazonías involucra demasiados desafíos para las sociedades que las habitan hace milenios, y de alguna manera aquellas que habitan el planeta. Las amazonías son cuestión de la humanidad, y de las muchas formas de vida. Se trata de la vida, finalmente. La imposibilidad de coexistencia de prácticas radicalmente inconciliables presionan las poblaciones “indígenas” a adaptarse, a elegir estrategias de organización y acción, no sólo para la disputa política y el conflicto, sino de su propia reproducción material y subjetiva. Hay cambios al interior de las sociedades en términos de las acciones, transiciones paradigmáticas y las subjetividades emergentes (Santos, 2003), el reposicionamiento y/o transformación multidireccional entre actores, colectivos e individuales, quienes aspiran por autonomía y representación. La reproducción social está asociada a vínculos, los cuales hacen parte de los conflictos y son aspecto fundamental en la consideración del carácter dinámico y mutable de los movimientos sociales: “las sociedades de la periferia que comienzan así el ‘poscapitalismo’ a través de estrategias [...] nacional-populares más que de ‘construcción socialista’ se ven obligadas por eso mismo a enfrentar todas las dificultades que implica la desconexión” (Amin, 1989, p.133).



La elección por la autonomía, por el auto-gobierno, genera dilemas profundos sobre la temporalidad de la vida, considerándolo que se opone al tiempo acelerado del consumo de las culturales occidentales capitalista. O al menos una apropiación selectiva de ellas, o de los prometidos beneficios de la asimilación y la incorporación en los mercados transnacionales. Las misiones y misioneros son otros, aunque permanezcan las marcas de las violencias y deudas históricas de la colonización: las misiones de reducción, los coroneles y barones del caucho, la ocupación cristiana, la caza y venta de pieles de animales, el Baguazo. Santos-Granero y Barclay (2010) analizando el escenario de Bagua reflexionan sobre la percepción de la violencia capitalista en los territorios awajún y wampis a partir de “eco-cosmologías nativas” y las “economías políticas de vida”, responsables por éticas populares de autorregulación. Según esta perspectiva mítica, la energía y fuerzas vital “es finita, generalmente fija, escasa, en constante circulación y desigualmente distribuida” (Santos-Granero y Barclay, 2010, p.24).

Entre los retos de la balanza del desarrollo está el dilema sobre la juventud y la tradición, la preservación mutable de la cultura en el tiempo que permita proyectar a un futuro largo los sentidos de desarrollo para la vida plena en la amazonía peruana. Para ello la apropiación de las tecnologías carga su doble, el consumo de redes sociales y la industrialización cómo deseo de acceder a los beneficios de las sociedades occidentales, sin que genere un desprecio a la riqueza del territorio. En su milenaria historia el pueblo wampis reinventan sus prácticas para seguir existiendo, resisten frente a la violencia inherente al desarrollo de la economía capitalista, pues

la industrialización y la modernización en este marco sólo produjeron la modernización de la dictadura, la sustitución de los viejos sistemas oligárquicos y patriarcales por una violencia fascistoide eficaz y moderna. No podría ser de otro modo, pues el desarrollo periférico implicaba el agravamiento de las desigualdades sociales y no su reducción. (Amin, 1989, p. 211-212)

Para ello, es notable la capacidad de interlocución y circulación de las organizaciones indígenas amazónicas, en escala local, nacional e internacional. Las redes de solidaridad son importantes, incluso para la seguridad y defensa de los territorios. El intercambio de intelectuales y profesionales “indígenas” para el cumplimiento de objetivos colectivos es parte de la transgresión a la frontera de la razón del estado moderno. Así, la constitución de un archivo informacional, asociado a los medios en cadenas de comunicaciones propios de las naciones indígenas define las agendas de



investigación sobre la amazonía, sea para los intelectuales orgánicos o aquellos parte de alianzas desde otros orígenes culturales.

Por lo tanto, no es suficiente o adecuada la consideración de planes de desarrollo o ordenamiento territorial de manera aislada - reproduciéndose la abstracción colonislista de fronteras arbitrarias desde proyecto de dominación – considerándose la tendencia histórica de la expansión transnacional de las fronteras de explotación del capitalismo. Los desafíos para la comprensión, la defensa de la amazonía y los territorios de las muchas culturas que la habitan involucran a todas las sociedades cosmopolitas en sus colonialismos internos. El autogobernarse involucra la totalidad de las necesidades, para producción y reproducción, sobretodo si pensamos la relación entre el hacer comunal y las correlaciones de fuerzas asimétricas multiescalares. Los movimientos sociales pierden su potencial emancipatorio si no intentan aprender con las resistencias populares frente al colonialismo interno o intracolonialismo (González-Casanova, 2003, p.22) del cual el neoliberalismo y el capitalismo financiero-industrial es parte: “la crisis del pensamiento social es pues ante todo, en su dimensión principal, la del pensamiento burgués que se niega aceptar esta comprobación, que lo obligaría aceptar que el capitalismo no es ‘el fin de la historia’, la ‘racionalidad definitiva y eterna’” (Amin, 1989, p.132).

La razón colonial, patriarcal y capitalista occidental reduce la diversidad de existencias, disminuye la potencia de las experiencias generando miedo, y luego terror (Calveiro, 2014). Se establecen límites jurídicos, sistemas de justicia y seguridad extraordinarios desde las autoridades comunales, sea por la vigilancia, las rondas, la justicia comunitaria.

En estos términos, hay una percepción consciente de las amenazas de las fuerzas de Estado y Capital sobre los territorios campesinos e indígenas, cuando se pone en riesgo la supervivencia misma de la cultura, de la sociedad. Las resistencias no son circunstanciales, sino fortalecen el tejido social, identifican necesidades de mediano y largo plazo, planean la recuperación de tierras y de los territorios degradados por la explotación colonial, recuperan también memorias y enseñanzas, son por lo tanto ricas en sentido pedagógico desde las estrategias conscientes y los alcances de las prácticas inscritas en el espacio y de los sentipensares (Escobar, 2014) de los protagonistas sociales en la región andino-amazónica. Se reconstruye la dignidad, se apropian de la violencia defensiva para detener la violencia definitiva o capital. Rompen con el monopolio de la violencia del Estado tomado por fuerzas privadas de expoliación, así



como se manifiestan como alterpartidarias reconociendo los límites de las formas exógenas de dominación y control territorial. Contribuyen, por lo tanto, en el presente de América Latina para la reinención de las democracias representativas, en crisis política, tal cual están en crisis los regímenes económicos neoliberales.

Referencias bibliográficas

- Amin, S. (1989). *El eurocentrismo*. Ciudad de México: Siglo Veintiuno Ed.
- Bebbington, A. (2011). *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales*. 2ª ed. Lima: IEP; CEPES.
- Calveiro, P. (2014). Repensar y ampliar la democracia. El caso del municipio autónomo de Cherán K'eri. *Argumentos*, vol. 27(25), pp. 193-212.
- Ceceña, A. E. (2013) Subvertir la modernidad para vivir bien (o de las posibles salidas de la crisis civilizatoria). *Crisis civilizatoria y superación del capitalismo*, 1ª edición.
- Césaire, A. (2006) *Discurso sobre el colonialismo*. Madrid: Akal.
- Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín: Ediciones UNAULA (Colección Pensamiento vivo).
- Espinosa, A. (2016). Gobiernos subnacionales y pueblos indígenas en la Amazonía Peruana". *Cuaderno de Trabajo* N°33.
- Garra, S., Gala, R. R. (2014). Por el curso de las quebradas hacia el 'territorio integral indígena': autonomía, frontera y alianza entre los awajún y wampis. *Anthropologica del Departamento de Ciencias Sociales*. Vol. XXXII, N°32, pp. 41-70.
- González-Casanova, P. (2003). Colonialismo Interno (una redefinición). *La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 409-434.
- Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW). (2015) Estatuto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis.
- Harvey, D. (2007). *Espacios de esperanza*. Madrid: Akal.
- Leff, E. (2006). La ecología política en América Latina. Un campo en construcción. En Hector, A. (Ed.) *Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Aráoz, H. M. (2013). Minería, modernidad y colonialismo. Una aproximación a la naturaleza mineral del orden colonial moderno. En Hoetmer, R., Castro, M., Daza, Mar; De Echave, J.; y Ruiz, C. (orgs.). *Minería y movimientos sociales en el Perú. Instrumentos y propuestas para la defensa de la vida, el agua y los territorios*. Lima, Perú: Programa Democracia y Transformación Global/ CooperAcción).
- Porto-Gonçalves, C. W. (2001). *Geo-grafías: movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.



_____ (2015). Amazônia enquanto acumulação desigual de tempos: uma contribuição para a ecologia política da região. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, N° 107, pp.63-90.

Quijano, A. (2005). El “movimiento indígena” y las cuestiones pendientes en América Latina. *Revista Tareas*. Ciudad de México: CELA, N°119, pp. 31-62.

_____ (2012). ¿Bien vivir?: entre el “desarrollo” y la descolonialidad del poder. *Contextualizaciones Latinoamericanas*, Año 4, N° 6, enero-junio.

Santos, B. S. (2003). *Crítica de la Razón Indolente: contra el desperdicio de la experiencia*. Bilbao: Editorial Desclée.

Santos-Granero, F., Barclay, F. (2010). Bultos, selladores y gringos alados: percepciones indígenas de la violencia capitalista en la Amazonía peruana”. *Anthropologica del Departamento de Ciencias Sociales*. Lima: PUCP, Vol. XXVIII, N° 28, pp. 21-52.

Segato, R. (2016). Una paradoja del relativismo. El discurso racional de la antropología frente a lo sagrado. En Rufer, M., Gorbach, F. (eds.) *(In)disciplinar la investigación. Archivo, trabajo de campo y escritura*. Ciudad de México: Siglo XXI-UAM.

Souza, M. L. S. (2013). “Escala geográfica, ‘construção social da escala’ e ‘políticas de escalas’”. En Souza, M. L. S. *Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

Swyngedouw, E. (2010) ¿Globalización o glocalización? Redes, territorios y reescalamiento. En Victor R. F., Carlos B. (dirs.) *Escalas e políticas del desarrollo regional. Desafíos para América Latina*. Buenos Aires: Editorial Mino y Dávila.

Ulloa, A., Göbel, B. (2014). Colombia y el extractivismo en América Latina. En Ulloa, A., Göbel, B. (orgs.) *Extractivismo Minero en Colombia y América Latina* (pp.15-33). Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Walsh, C. (2012). Interculturalidad y (de)Colonialidad: Perspectivas Críticas e Políticas. *Visão Global (Joaçaba)* Vol. 15, N° 1-2, p. 61-74, janeiro-dezembro.

Zavaleta, R. (2009). Cuatro conceptos de la democracia. En Tapia, L. (comp.), *La autodeterminación de las masas*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Clacso.



Avá-Guarani e o processo de demarcação de terras indígenas no Oeste do Paraná (década de 2010).

Rinaldo José Varussa

Resumo

Esta comunicação busca apresentar e discutir processo de demarcação da Terra Indígena Guasu Guavirá, no Oeste do Paraná, tendo como principal eixo a disputa que se estabeleceu na região entre os indígenas Avá-Guarani e o movimento que se constitui na região contrário à demarcação e capitaneado principalmente por lideranças do denominado agronegócio.

Palavra chave

Demarcação de terras indígenas; Direitos e disputas; Ruralistas e Estado no Brasil; Organização dos povos indígenas.

Introdução

Este artigo busca discutir, através do processo de demarcação da Terra Indígena (TI) Guasu Guavirá¹, nas cidades de Guaíra e Terra Roxa, no oeste do estado do Paraná (região sul do Brasil), o enfrentamento entre povos indígenas e produtores agropecuários.

Este processo, ainda que tenha assumido maior visibilidade para o conjunto da população da região Oeste do Paraná em 2013, a partir da intensificação da mobilização e divulgação do conflito por parte de grupos oponentes à demarcação, pode ser delimitado, no que se refere especificamente ao TI Guasu Guavirá como tendo seu início no final da década de 1980.

Embora a expropriação indígena na região possa ser observada há mais de um século, notadamente a partir da ocupação empreendida por empresas extrativistas que passaram a atuar ali em terras então devolutas, passando pela intensificação da produção agropecuária com o loteamento da área por “companhias colonizadoras” com anuência, em alguns casos irregulares, de governos estaduais e federais, a partir de meados do século XX, e pela construção da usina hidrelétrica de Itaipu, nas décadas de 1970 e 1980 (dentre outros, Ribeiro, 2002; Alcantara Et All, 2019), a retomada da luta pela demarcação de TI pelos Avá-Guarani na região parece ter se implementado no final da década de 1980.



Estabelecendo a luta pela demarcação

O denominado processo de retomada pelos Avá-Guarani, se alinharia com o prescrito na Constituição Federal de 1988, considerando o redimensionamento que ela traz em relação aos povos indígenas e à demarcação de suas terras.

A legislação que precedeu a Constituição de 1988, previa “a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados”. Esta última Constituição, em seu artigo 231, define que “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.”

Com isso, se estabelecia a possibilidade de deslocamento do marco temporal da ocupação das terras, ao tratá-la como “tradicionalmente ocupada” e não continuamente/permanentemente e no presente imediato à demanda por demarcação pelos indígenas presente na legislação anterior. É em relação à interpretação deste “marco temporal” que se firmarão as contraposições de grupos contrários às demarcações, como abordarei adiante.

Institucionalmente, a demarcação da TI na região de Guaíra e Terra Roxa teria seu início em fevereiro de 2009, com a nomeação do “Grupo Técnico” responsável pela realização dos estudos antropológicos e históricos acerca da presença e ocupação indígena na região.

Porém, até 2014, este trâmite inicial parece não ter avançado um alinhamento deste processo com o conjunto de demarcações estabelecidas no pós Constituição de 1988, qual seja a morosidade que descumprir em muitos anos e mesmo décadas o prazo estabelecido por aquela lei, que era de 5 anos para a efetivações das TI em todo o país.

Esta primeira etapa de “estudos de identificação e delimitação” seria concluída em 15 de outubro de 2018 - portanto, quase 10 anos após o seu início -, com a publicação do “Despacho n.2 de setembro de 2018” assinado pelo então presidente da FUNAI Wallace Moreira Bastos e que trazia o “Resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Guasu Guavirá (PR)”².

Esta quase uma década para a conclusão daquela primeira etapa pode ser caracterizada também pela intensificação das disputas em relação à demarcação, sendo possível se identificar na atuação de grupos, capitaneados por ocupantes de mandatos eletivos no Legislativo (deputados e senadores) com vínculos na região e por



parte dos detentores de áreas rurais que se opunham a ela, a implementação de ações que pareciam buscar no conjunto da sociedade, portanto, para além dos personagens e interesses diretamente envolvidos, a constituição de um ambiente hostil e adverso às demandas do povo Avá-Guarani da região.

Nesta intensificação das hostilidades, dá-se a abertura da Coordenação Técnica Local (CTL) em Guaira, em 2012, com a nomeação de 3 funcionários para atuarem mais diretamente na região³. Esta presença física da FUNAI na região, conseqüentemente, fez-se mais atuante, com o corpo técnico passando a mediar de forma mais efetiva e visível o acesso da comunidade indígena a bens e serviços públicos, por exemplo, na área de saúde e educação, que lhes eram garantidos constitucionalmente. Ao mesmo tempo, o diálogo e o encaminhamento de reivindicações junto a outros órgãos públicos, como as universidades da região e o Ministério Público Federal, também seriam implementados pelo funcionamento da CTL.

Esta atuação a partir da CTL não passou despercebido aos opositores da demanda indígena, como apontam o direcionamento de ações violentas aos membros daquele órgão, os quais solicitariam no ano seguinte transferência para outras localidades, o que levaria ao fechamento do escritório no segundo semestre de 2017, sendo reaberto somente em março de 2018⁴.

Estas ações violentas pontuais se articulavam a práticas ostensivas e organizadas, implementadas, notadamente, a partir de 2013, que visavam não só a contraposição ao processo institucional da demarcação, como também firmar, no conjunto da população, as perspectivas e argumentos que fundamentariam aquela oposição.

Dentre estas práticas destacam-se a institucionalização da campanha contra a demarcação através da formação, em 2013, da Organização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade (ONGDIP). Esta entidade, com endereço físico em Guaíra, atuou principalmente na produção de materiais impressos (panfletos e faixas), na disseminação de campanhas pelas redes sociais e demais meios de comunicação (jornais, rádio, televisão), seja na divulgação de artigos e opiniões sobre a demarcação, seja na aglutinação e mobilização presencial (passeatas, atos, reuniões) dos que se identificassem com o ideário representado nesta organização.

Um dos materiais de maior repercussão produzido pelos opositores à demarcação, o qual sintetizava os principais aspectos defendidos por estes, foi um folder assinado por uma “Comissão de Defesa da Verdade”, colorido e ilustrado, distribuído na região no



primeiro semestre de 2013, cujo principal ponto, visando estabelecer uma oposição à demarcação, era apresentar como objetivo dos Avá-Guarani a delimitação de uma área de 100 mil hectares (ilustrada com mapa), abarcando a quase totalidade da faixa limítrofe do Brasil com o Paraguai, numa extensão, de norte a sul, de aproximadamente 180 km de comprimento, indo de Guaíra a divisa do estado do Paraná com Santa Catarina, abarcando, parcial ou totalmente 15 municípios da região, habitados por aproximadamente 400 mil habitantes não indígenas.

Esta informação sobre a dimensão da área a ser atingida pela demarcação seria reproduzida nas redes sociais, imprensa escrita e televisiva, dando-lhe um “efeito de verdade factual”: “os índios **exigem** [grifo meu] a demarcação de um território de 100 mil hectares, o que tomaria dentro da Região cerca de 10% das terras destinadas para a agricultura.”⁵

Aliado a essa hipotética área, os contrários à demarcação buscavam fundamentar igualmente duas noções contrárias à demarcação da TI Guasu Guavirá: a primeira, caracterizar um crescimento vertiginoso da população indígenas nos últimos anos na região (40 vezes em Guaíra entre 1991 e 2010, de 11 para 456 pessoas, segundo a matéria), em contraste com o verificado no conjunto do país, a qual teria se multiplicado por 3 (crescimento de aproximadamente 200%) naqueles 20 anos. Este comparativo seria indicativo da imigração de populações paraguaias e sulmatogrossense para a região de Guaíra e Terra Roxa, o que evidenciaria para os autores, conseqüentemente, que não se tratava de uma população nativa, autóctone da região.

A segunda noção que buscava fundamentação no mapa das TIs no Brasil, estabeleceria uma desproporção entre a população indígena e a área por ela ocupada, em confronto com aquela em posse dos que se denominavam de “setor produtivo” ou mesmo com o conjunto da população não indígena, rural e urbana. Como seria grafado em outro encontro promovido por este grupo e forjando uma imagem para a situação, cada índio ao nascer já possuiria 300 hectares e improdutivos.⁶

Desconsiderando a perspectiva e modo de vida distinto dos indígenas no que se refere ao uso da terra, para além das incongruências do argumento da suposta distribuição de terras entre os indígenas, estas duas noções visavam fundamentar dois argumentos com vistas a aglutinar uma parcela mais ampla da população para além daqueles diretamente ligado ao agronegócio: 1) a improdutividade dos indígenas e 2) a orquestração montada por outros sujeitos, notadamente institucionais, que visaria



impedir o desenvolvimento e o progresso do país em benefício de interesses estrangeiros.

A contraposição a este tipo de informação por parte dos indígenas e demais proponentes da demarcação não atingia a mesma repercussão na região, não obtendo o mesmo espaço para uma interlocução com a população

Nesta veiculação, além da abordagem adversa à demarcação, observa-se a ausência do contradito, com os representantes do movimento contrário à TI, na quase totalidade ocupantes de cargos eletivos no poder executivo e legislativo (nacional, estadual e municipais), configurando-se de forma uníssona como porta-vozes daquela posição e situação.

Este conjunto de argumentos produzidos pelo movimento contrário à demarcação, além da contraposição local, visava a mudança nas atribuições dos poderes na definição e regulamentação das demarcações, através da aprovação do projeto de emenda constitucional (PEC) 215/2000. Essa emenda constitucional tornaria “competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas, estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei.”⁷ Ou seja, retiraria do Ministério da Justiça, da FUNAI (vinculada então a esse Ministério ⁸) e da presidência da República a responsabilidade e prerrogativa das demarcações.

Vincula-se ainda a PEC 215/2000, uma reconfiguração do denominado “marco temporal”, inexistente na Constituição de 1988: uma espécie de condição para obtenção de demarcação, na qual os indígenas teriam que comprovar a ocupação do território pleiteado ou que haviam resistido e firmado contraposição judicializada (no jargão jurídico, o “renitente esbulho”) na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988 (Cunha & Barbosa, 2018: 120). Assim, o “marco temporal” para os processos de demarcação, além de atribuir ao esbulhado (no caso, os indígenas) o ônus da prova da ocupação ou da resistência ao esbulho, firmaria a possibilidade, numa contradição à própria Constituição, de legitimação do esbulho como forma de obtenção do direito de propriedade⁹.

No caso do processo de demarcação da TI Guasu Guavirá, ao “marco temporal” se vincularia uma ação implementada há mais tempo do que esta formulação - que lhe



daria até mesmo suporte na sua aplicação –, a qual pesquisadores da temática denominaram de “invisibilização” dos povos indígenas na região.

Essa “invisibilização”, para além de desconsiderar a presença indígena na região, buscou estabelecer o “apagamento” daqueles povos da região, forjando caracterizações tais como a de “vazio demográfico”, que justificaram projetos de ocupação, no caso do Oeste do Paraná, notadamente a partir da década de 1940 (Mota, 2000).

De maneira geral esse processo conflitivo, levou a alteração na convivência entre os grupos envolvidos na disputa, como sugere o crescimento nas ocorrências de violência física e direta contra os indígenas. Tal situação levou a Comissão Guarany Yvyrupa (CGY), organização constituída pelos índios que abarca grupos indígenas do sul e sudeste do Brasil, a realizar um levantamento da questão, em 2016, cobrindo o período de 2010 a 2016. O resultado, publicado em 2017, seria utilizado para documentar denúncias das agressões sofridas pelos indígenas na região.

No trabalho realizado pela CGY foram identificadas três formas de violência física contra os Avá-Guarani: agressões, mortes e suicídios.

Das três, os suicídios eram considerados no documento a modalidade mais alarmante, uma vez que, no período abrangido, 14 casos foram identificados, sendo que em 2015 atingiria o ápice com 5 casos, evidenciando um agravamento na situação (Comissão Guarani Yvyrupa, 2017: 97).

Além dos suicídios, a comunidade indígena da região passou a evidenciar outros riscos de morte, implementados por terceiros, na forma de atentados, sendo, no período de 2013 a 2018, registradas três destas ocorrências, quando os autores, se utilizando de armas de fogo, assassinaram 2 indígenas e feriram outros 2, um deles ficando paraplégico. Os três casos permaneciam insolúveis até 2019.

Além desta violência física, a hostilidade aos indígenas, como registram as publicações citadas, exercia-se cotidianamente por meio de ameaças, assédios e demissões daqueles que se empregavam em empresas e nas propriedades agrícolas, num conjunto de ações que visavam dificultar, se não impedir, a sobrevivência indígena na região.

Em nível regional, os Avá-Guarani mantinham suas ações de ocupação pontuais (foram registradas nesta pesquisa, seis destas ações entre 2014 e 2018) em áreas rurais de Guaíra, Terra Roxa e, por duas vezes, em Marechal Cândido Rondon, no distrito de



Porto Mendes. Nestas ações, pequenos grupos indígenas, compostos por uma ou duas dezenas de adultos e crianças se deslocavam e montavam acampamentos em pontos isolados da região.

Em todas essas ocupações, a reação ruralista foi imediata, contando com o deslocamento de dezenas – em algumas ocasiões, os noticiários apontavam mais de uma centena - de não-indígenas, além da presença da polícia militar e/ou federal, que nos casos registrados mediou o conflito e promoveu a desocupação das áreas, sem que fossem registradas ações de intervenção direta e violenta.

A imediata e expressiva mobilização dos agricultores observadas nestas ações indígenas, evidencia não só a consolidação na região da oposição à demarcação entre os denominados proprietários de terra, como também a capacidade de aglutinação de forças que tal perspectiva assumia. Para tanto, ocorria simultaneamente às ações indígenas, um exercício de produção de interpretação destas experiências, como se observaria na formulação produzida em outra reunião convocada na sequência de um episódio de ocupação indígena. Reunidos a partir de chamamento da ONGDIP, em 24 de abril, “cerca de 200 agricultores”, foram, como propõe o título da publicação, “incentivados a se unir para blindar a invasão indígena”, com a ocupação narrada acima sendo interpretada como um ponto em algo mais amplo que “eles [os indígenas] estão apenas começando”, pois tratar-se-ia de

um grande plano de invasão, sendo que Guaira e Terra Roxa são apenas a ponta de lança do plano deles, que envolve todo o Oeste do Paraná, engolindo municípios inteiros como Mercedes e toda essa região beira lago. (...) Uma grande tentativa de criar a nação Guarani no sul do Mato Grosso e no Oeste do Paraná, em Santa Catarina, além do Paraguai e Argentina.¹⁰

A hiperbólica pretensão inicial atribuída aos Avá-Guarani de 100 mil hectares, assumia proporções continentais nesta avaliação que, didaticamente, estabelecia o vínculo de uma situação presenciada por, talvez, centenas de agricultores, mas isolada – uma pontual ocupação pelos indígenas – a um conjunto mais amplo, transformando, ao mesmo tempo, este caso particular em prova do geral, do “grande plano de invasão”. Nesta formulação, ainda que mantendo a perspectiva conspiratória de que as demarcações intentaríamos contra os “interesses nacionais”, os indígenas eram reposicionados, agora não mais como brinquedos de entes e entidades alienígenas, mas como sujeitos promotores desta “nação Guarani” transnacional.



Essa “reformatação” do papel dos indígenas nas demarcações parecia contribuir para a mudança de ambiente vivida na região no que se refere à hostilidade àquela população, relatada acima, o que motivaria as lideranças indígenas a solicitarem, em 29 de abril de 2015, junto ao MPF em Guaíra a instauração de inquérito civil “para apurar a ocorrência de violação aos direitos indígenas e prática discriminatória veiculada no Portal Guaíra com publicação de texto assinado pela ONGDIP.”¹¹

O inquérito instaurado não impediria a continuidade da campanha contra a demarcação e, em 25 de agosto de 2015, a imprensa local buscava antecipar o resultado dos estudos de delimitação da TI Guasu Guavirá, publicando matéria que informava que “a intenção da FUNAI seria demarcar 11,5 mil alqueires” (ou 27,5 mil hectares). A informação teria sido dada pelo prefeito de Guaíra Fabian Vendrusculo durante Fórum Nacional Sobre Titulação de Terras Indígenas e Titulação de Terras em Faixa de Fronteira, organizado pela Subcomissão de Assuntos Fundiários da Câmara dos Deputados e realizado em Guaíra, em 22 de agosto de 2015.

Este tipo de divulgação levou o Ministério Público Federal (MPF) de Guaíra a emitir uma nota de esclarecimento sobre o processo de demarcação, em 17 de dezembro de 2017, na qual apontava que “a Justiça Federal [1a. Vara Federal de Guaíra] determinou, em sentença proferida no mês de outubro [de 2017], que a Fundação Nacional do Índio (Funai) tem prazo até 31 de dezembro de 2018 para concluir os estudos e procedimentos técnicos.”¹²

Especificamente sobre as áreas que estariam em questão numa eventual demarcação da TI Guasu Guavirá, objeto dos dois mapas divulgados anteriormente, o MPF apontava para a provisoriedade dos dados, uma vez que os estudos estavam em andamento, razão pela qual o material produzido encontrava-se em segredo de Justiça. Diante de tal natureza e condição das informações, o MPF “esclarecia que ainda não havia um mapa definitivo contemplando eventual área indígena na região dos municípios de Terra Roxa e Guaíra.”¹³

Esta disputa pela definição da metragem da área sujeita à demarcação teria um novo episódio em 15 de outubro de 2018, desta feita de forma oficial, quando foi publicado no Diário Oficial da União o “Despacho n.2” assinado pelo então presidente da FUNAI Wallace Moreira Bastos¹⁴.

As investigações e estudos realizados pelo Grupo Técnico, concluíra que a TI Guasu Guavirá totalizaria 18.421 hectares ou 7.675 alqueires, além da área de ilhas, sendo



que estas, na sua quase totalidade, pertenciam a áreas de reserva do Lago de Itaipu e ao Parque da Ilha Grande no Rio Paraná. A área em questão era ainda apresentada num mapa, o qual se diferenciava substancialmente daqueles produzidos pelo movimento contrário à demarcação, não só na dimensão, mas também na disposição da área em relação às áreas urbanas de Guaíra e Terra Roxa.

Apesar desta nova e expressiva redução da TI Guasu Guavirá – dos 100 mil hectares (ou 41 mil alqueires) propagandeados pelos grupos contrários à demarcação em 2013, aos oficiais (mas, indicativos e não legalizados) 7.675 alqueires (ou 18.421 hectares), configurava-se uma TI cinco vezes menor -, a divulgação feita do documento na região, notadamente pelo movimento de oposição à demarcação, da mesma forma que as divulgações anteriores, parece ter se inserido na disputa de forma desfavorável aos indígenas¹⁵, a se considerar a manifestação produzida pelo MPF em Guaíra. Em nova nota publicada em 15 de outubro, o MPF, “diante dos recentes boatos e notícias falsas veiculadas em grupos de redes sociais em relação à demarcação de terras indígenas”, reiterava os trâmites do processo de demarcação com base no Decreto nº 1775/1996.”¹⁶

O atentado sofrido pelo indígena Donecildo Agueiro, de 21 anos, do Tekoha Tatury, em 6 de novembro de 2018, que resultou na sua paraplegia, aponta para o não acatamento das manifestações do MPF. Agueiro fora baleado na saída de uma reunião no CTL de Guaíra, evidenciando que o quadro de tensão e violência contra os indígenas se mantinha.

Tal quadro teria um desfecho parcial e provisório favorável aos grupos contrários à demarcação, em 7 de novembro de 2018, quando o desembargador federal Candido Alfredo Leal Junior, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), concedeu uma liminar à Federação Agrícola do Estado do Paraná (FAEP) para suspender, pelo prazo de 90 dias, o processo de demarcação. Parecendo desconsiderar a publicação do RRCID, em 15 de outubro, e o trâmite do processo de demarcação previsto no decreto, a decisão do desembargador teria se baseado “no suposto descumprimento de uma medida cautelar de 2016, que obrigava a FUNAI a informar à FAEP sobre a relação de propriedade que seriam

afetadas.”¹⁷

Em 3 de abril de 2019, o MPF de Guaíra teve negado recurso contra a liminar concedida a FAEP, mantendo assim a suspensão do processo de demarcação da TI Guasu Guavirá e condicionando a sua continuação ao julgamento das apelações interpostas



ao caso ¹⁸, o que jogava numa indeterminação temporal o processo de demarcação e, conseqüentemente, sua conclusão.

Conclusões

Passados 10 anos do início formal dos trâmites para a demarcação da TI Guasu Guavira no Oeste do Paraná (Brasil), além de inconclusivo, o processo caracteriza-se pelo adensamento das disputas e tensões entre grupos e projetos distintos de sociedade e, mais especificamente, de uso e ocupação da terra.

Neste acirramento das disputas, até o presente momento, evidencia-se uma fragilização dos preceitos constitucionais e do exercício de direitos, no caso, dos Avá- Guarani, em favor do denominado agronegócio.

Tal quadro representa não só uma ameaça a modos de vida tradicionais, mas também a própria sobrevivência física daquela etnia, o que se apresenta como repetição de uma situação evidenciada há séculos.

Notas

¹ Uma tentativa de tradução da denominação da TI: *guasu* é um aumentativo que se refere ao território como um todo, abarcando, portanto, os pequenos pedaços de terra em que se encontram no presente os indígenas, englobando todos os *tekoha* de uma região, as matas, etc. *Guavira* é uma fruta, também conhecida como guabiroba, comum à região. In Centro de Trabalho Indigenistas. Violações dos direitos humanos e territoriais dos Guarani no oeste do Paraná (1946-1988), 2013, p.9.

² In Diário Oficial da União, 15/10/2018, Edição: 198, Seção: 1, p.29. Disponível em: <<https://bit.ly/3rVa27Q>>. Acessado em 24/10/2018.

³ Até 2012, a região Oeste do Paraná era atendida unicamente pelo Posto Indígena do Ocoy, localizado na reserva indígena de mesmo nome, na cidade de São Miguel do Iguaçu, a qual por sua vez, assim como a CTI de Guaíra, é subordinada à Coordenadoria Regional Interior Sul sede Chapecó.

⁴ Jornal O Paraná, "Funai reabre em Guaíra, mas novo coordenador só dia 10", 2/02/2017. In <https://bit.ly/3hK0EiE>>. Acessado em 18/03/2018. Sobre a ameaça aos funcionários, ver Comissão Guarani Yvyrupa, "Guaíra & Terra Roxa. Relatório sobre violações de direitos humanos contra os Avá-Guarani do Oeste do Paraná", 2017.

⁵ In CATVE.com, "Índios e agricultores travam 'batalha' por terras na Região Oeste", 23/01/2013. Disponível em: <catve.com/noticia/6/50668/indios-e-agricultores-travam-atalha-por-terras-na-regiao-oeste>. Acessado em 28/02/2013. A CATVE é um portal de notícias, que atua também como um canal de TV aberto on-line, sediado na região



Oeste do Paraná (Cascavel), que produz matérias jornalísticas, vinculadas à sua programação e distribuída para outros veículos de comunicação.

⁶ Jornal O Presente, “Produtores se unem para evitar desapropriação de terras”, 09/04/2013, p.14.

⁷ In “Almir Sá”, www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/sa-almir. Acessado em 22/02/2016.

⁸ Em 1o. janeiro de 2019, por meio da Medida Provisória 870, o presidente da República recém-empossado decretaria a transferência da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Em 28 de maio de 2019, o Senado, alterando aquela MP, reestabeleceria a FUNAI no Ministério da Justiça.

⁹ A contraposição a aplicação da regra do “marco temporal” firma-se na interpretação, como sintetiza Samuel Barbosa, de que “exigir a ocupação na data da Constituição sem a discussão da ocorrência do esbulho seria uma legitimação retroativa do uso da violência, esvaziando o sentido da Constituição” (in CUNHA & BARBOSA, 2018: 131).

¹⁰ “Agricultores são incentivados a se unir para blindar invasão indígena”. In O Presente, 25/04/2014, pp.24- 25.

¹¹ “MPF propõe ação civil pública contra publicações de ofensas à população indígena em Guaira (PR)”. 04/05/2018. Disponível em www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-propoe-acao-civil-publica-contrapublicacoes-de-ofensas-a-populacao-indigena-em-guaira. Acessado em 23/08/2018.

¹² MPF faz esclarecimento sobre estudos para demarcação de terras indígenas no PR. Disponível em www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-faz-esclarecimento-sobre-estudos-para-demarcacao-de-terras-indigenas. Acessado em 20/10/2018. O processo citado e julgado pela 1a.Vara Federal de Guaira está disponível em: <www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.ph?pacao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=aAKZ&hdnRefId=a7042c1d30e32b48825174f8129b1cc4&selForma=NU&txtValor=50010760320124047017&chkMostrarBaixados=&todasfases=S&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSubmeteuPesquisa=letras>. Acessado em 25/11/2018.

¹³ Idem, ibidem.

¹⁴ Wallece Moreira Bastos assumiu a presidência da FUNAI, em 24 de abril de 2018, substituindo Franklimberg Ribeiro de Freitas, que pediu exoneração “alegando que estava enfrentando uma forte pressão da bancada ruralista”. Bastos atuara até então como subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério dos Transportes, tendo



sido indicado para a presidência da FUNAI, segundo órgãos da imprensa divulgaram a época, pelo líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura (PSC-SE) e contando com o apoio da bancada ruralista. Wallece Bastospregoeiro concursado da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), onde foi presidente da Comissão Permanente de Licitação e não foi identificada nesta pesquisa qualquer experiência, até então, que o ligasse a questão indígena. Com informações obtidas em: agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-04/wallace-moreira-bastos-sera-o-novo-presidente-da-funai (acessado em 13/01/2019); www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/4859-wallace-moreira-bastos-e-nomeado-para-presidente-da-funai (acessado em 13/01/2019)

¹⁵ Esta publicação e divulgação do RRCID deu-se às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2018, sendo que um dos candidatos na disputa – e que seria eleito - colocara-se claramente contrário às demarcações áreas destinadas aos indígenas.

¹⁶ “MPF esclarece desdobramentos de demarcação de terras indígenas na região de Guaira (PR)”. Disponível em www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-informa-sobre-desdobramentos-de-demarcacao-de-terras-indigenas. Acessado em 20/10/2018.

¹⁷ Leonardo Fuhrmann, “Justiça suspende processo de demarcação no Paraná um dia após atentado contra indígena”. In De Olho nos ruralistas, 08/11/2018. Disponível em deolhonosruralistas.com.br/2018/11/08/justica-suspende-processo-de-demarcacao-no-parana-um-dia-apos-atentado-contra-indigena/ Acessado em 31/11/2018.

¹⁸ Tribunal Regional Federal da 4a. Região. “Agravo Interno em Petição (Turma) Nº 5034500- 28.2018.4.04.0000/RS.” Disponível em: <<https://bit.ly/2LhGaBH>> Acessado em 15/05/2019.

Referência bibliográfica

Alcântara, G.N. ET ALLI (org). Avá-Guarani: a construção de Itaipu e os direitos territoriais. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, 2019.

Brasil – FUNAI. RRCID Brasília: Imprensa Oficial – Diário Oficial da União. 2018.

BRASIL – Ministério Do Trabalho- OBMIGRA. Relatório Anual 2015. A inserção do imigrantes no mercado de trabalho no Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 2015.

BRASIL - INCRA. Livro Branco da Grilagem de Terras. Brasília: Imprensa Oficial, 1999.

Carvalho, Maria Lucia Brant de. Da terra dos índios a índios sem terra. O Estado e os



Guarani do Oco'Y: violência, silêncio e luta. São Paulo: PPG Geografia Humana-USP, 2013. tese de doutorado.

Centro De Trabalho Indigenistas. Violações dos direitos humanos e territoriais dos Guarani no oeste do Paraná (1946-1988): subsídios para a Comissão Nacional da Verdade. São Paulo: s/ed, 2013.

Comissão Guarani Yvyrypa. Guaíra & Terra Roxa. Relatório sobre violações de direitos humanos contra os Avá-Guarani do Oeste do Parana. Brasília: s/ed, 2017. Disponível em

https://bd.trabalhoindigenista.org.br/sites/default/files/Relatorio_Guaira&TerraRoxa_WEB.pdf

Cunha, M. C. Da & BARBOSA, S. Direito dos povos indígenas em disputa. S.P. Edusp, 2018.

_____. Índios no Brasil. S.P.: Ed. Claro Enigma, 2012.

Cunha, M. C. Índios no Brasil. História, direitos e cidadania. São Paulo: Ed. Claro Enigma, 2012.

Lugon, C. A República Guarani. S.P.: Expressão Popular, 2010.

Mota, Lúcio Tadeu. *As colônias indígenas no Paraná provincial*. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2000.

Paredes, B. (coord). O Mundo indígena na América Latina. S.P.: Edusp, 2018. PREZIA, B. História da resistência indígena. S.P.: Expressão Popular, 2017.

_____. Marçal Guarani. S.P.: Expressão Popular, 2006.

Ribeiro, Sarah I. T. G. O horizonte é a terra: manipulação da identidade e construção do ser entre os Guarani no Oeste do Paraná (1977-1997). P.A.: Programa de História-PUC-RS, 2002. Tese de doutorado.

Thompson, E.P. Senhores e caçadores. São Paulo: Cia das Letras, 1988.



Inclusion through Organization - Social Movements in the Global South as an Exercise of Self-Inclusion of the Excluded.

Philipp Altmann

Abstract

The major part of the population of the Global South has been excluded from participation in important spheres of society. They cannot communicate following the logics of modern society. Marginalized by politics, law, economy, and other functional systems, these people were and are considered as permanent threat and thus turned into objects of repression or paternalistic social policy – or simply invisibilized. However, exclusion can lead to major integration and by this, to a self-organization of the excluded. This text argues that self-organization of the excluded can be a way to self-inclusion. As organizations, such as community schools, sport clubs, cooperatives, are able to access, albeit in a marginal way, functional systems such as politics, education, and economics, the excluded can, through their organizations, communicate in the systems. Organization becomes therefore a way to participate in society.

This could be a way to understand social movements in the Global South. These movements often differ from the framework of social movement theory. Their organizations are based not only on protest or political engagement, but on the provision of services in their community. At the same time, they are the main pillars of some of the most influential social movements worldwide. This text will discuss how social movements in the Global South can be understood without the need to reduce their complexity to a degree where their everyday activity is invisibilized. Also, effects of the inclusion into society will be pointed out.

Keywords

Social Movements; Organization; Exclusion; Identity; Politics.

Introduction

Social movements of the Global South have been understood largely from theories elaborated on cases of the Global North. More than that, many of those theories are necessarily Eurocentric. The most important theories “are built on ‘Western’ assumptions about modernity and historically specific experiences of democracy, citizenship, and state formation that are [...] characteristic of Europe and the United States” (Davis 1999: 597). Therefore, most of the studies on social movements of the



Global South apply an epistemic reduction beforehand. They may be ignoring elements that are decisive for movements of the Global South – but irrelevant or taken for granted in movements of the Global North. Amongst those factors are the state, especially relevant for social movements of the US, and civil society, important above all in Europe (Davis 1999: 592-594). The same applies to economic, medical, educational, etc., engagements of many social movements of the Global South – they are not only social movements in the Northern sense, but also community enterprises, self-run schools, research institutes, and so on, all manifestations that are hard to understand from the perspective formed in the Global North. However, the Northern theories are still dominant in understanding social movements of the Global South. There are very few theories of social movements built upon experiences of the Global South. The most important ones are probably the proposal of a cultural politics (Alvarez/Dagnino/Escobar 1998) as central instrument of social movements, and the factor distance (Davis 1999) that is especially relevant for social movements of the Global South. In both cases, the authors try to establish a different base from where they build their theories. However, while their proposals are worthwhile and inspiring, they fail to consider adequately the global level.

This article proposes an alternative framework for understanding social movements of the Global South. In order to be able to grasp social movements in their context, it is necessary to part from a vision of how global society is constituted and how this constitution affects locality where social movements start. The argument here will be that exclusion is the first issue most social movements of the Global South have to address – before being able to engage into a cultural politics or discuss distance as a problem, that means, before taking inequality into focus. This influences heavily how those movements work – many times in ways Northern theory cannot understand because the results are not considered part of social movements.

An appropriate perspective for this enterprise could be systems theory. This theory offers a level of abstraction sufficiently high to understand local experiences as concrete expressions of general structures and tendencies. However, this article will not discuss the rich history of application of systems theory to social movements. Instead, the objective is to sketch a theoretical framework that allows to reflect the development of many of the social movements of the Global South. This means that it will be necessary to reflect how society works in the Global South. Concepts such as internal colonialism (González Casanova 1969, 2006) or the subaltern (Spivak 1994) can help to understand the conditions of appearance of social movements in these regions of the world. There



is one more delimitation needed: the background of the theoretical reflections presented are rural social movements in Latin America. While there are many characteristics that can be considered as universal, there are conditions and experiences of social movements in Africa and Asia that cannot be reflected here.

Exclusion as central factor of modern world society

Society has been global at least since around 1500. Since this moment, the European world-system became global, including its institutions, rules, and culture (Luhmann 1982: 133, Wallerstein 2004: 17), and allowed -at least virtually or for a few- communications around the globe. This globalization led to a diffusion of European social logics and adaptations of them in different parts of the world with different outcomes. These global differences are unified by the centrality of division of labour inherent to capitalism (Wallerstein 2004: 23), also the starting point of functional differentiation. So, the different spheres or functional systems of society did not spread globally in the same manner and speed, politics being one of the few systems remaining territorial and able to control global streams of economic, scientific, educational, etc., exchange. This is how global inequality can be understood: “regional differences are going to be transformed into different degrees of participation within the framework of one global society, and, therefore, we have a problem of ‘underdeveloped countries’.” (Luhmann 1977: 43) However, this inequality does not mean a radical separation of different societies (Luhmann 1997: 72). With modernity, not only this specific form of inequality spread over the world – the globalization of the European world-system meant also the introduction of another social border: if the rules of the system apply to someone or not, if people living in a certain region have souls, the capacity to decide and live for and by themselves or not.

In one of the last publications during his lifetime, sociologist Niklas Luhmann imagined a future marked not by inequality or marginalization before all but by exclusion of large parts of the human population.

“The worst imaginable scenario might be that the society of the next century will have to accept the metacode of inclusion/exclusion. And this would mean that some human beings will be persons and others only individuals; that some are included into function systems for (successful or unsuccessful) careers and others are excluded from these systems, remaining bodies that try to survive the next day; that some are emancipated as persons and others are emancipated as bodies; that concern and neglect become differentiated along this boundary; that tight coupling of exclusions and loose couplings of inclusions differentiate fate and fortune: and that two forms of integration will compete:



the negative integration of exclusions and the positive integration of inclusions. In some places, e.g. the favelas or other forms of ghettoization in large cities, we can already observe this condition, and it is not unrealistic to expect that demographic developments and migrations will feed this kind of differentiation, even in Europe. And again, this is not a regional problem that could be avoided by political regulations and public spending; it is a problem in the relation between the social system of the world society and its human environment.” (Luhmann 1997: 76)

Here, we will argue that the metacode inclusion/exclusion is not a vision of the future but a reality since the beginning of modern world society. This metacode serves as a first boundary that must be passed in order to enter distinctions of inequality, discrimination, and so on. In this sense, first you must be included before you can be poor or a worker. “Modern society [...] is compatible with any degree of inequality of living conditions, as long as this does not interrupt communication.” (Luhmann 1982: 133) The problem starts when workers starve or students cannot reach their schools because they are too far away. The world-system that became global led inevitably to exclusions. Ever since there is a relatively autonomous economy, separated, at least partly, from tribal or familial pressures, there are people that cannot participate in this economy – not because of who they are, but because of reasons defined by economy itself (Luhmann 1982: 132). The same effect is visible in politics, science, law, and many other spheres of society.

If modern society “is the encompassing social system which includes all communications, reproduces all communications and constitutes meaningful horizons for further communications” (Luhmann 1982: 131), to be excluded from society means effectively the social death of the person in question (Meyer 2012: 6). The only boundary world society can accept “is the boundary of communicative behaviour, i.e. the difference between meaningful communication and other processes.” (Luhmann 1982: 132) When someone is not able to communicate in a meaningful way -from the perspective of a given system-, he or she can be considered as excluded. Functional systems “presuppose the inclusion of every human being, but, in fact, they exclude persons that do not meet their requirements.” (Luhmann 1997: 70) Exclusion as such is not a problem, it is indeed impossible to communicate constantly in politics, education, economy, and so on. The problem is when this exclusion becomes chronic – you are forced to leave school and cannot come back, you lose your citizens’ rights, you live in a region where money is not used. Someone excluded is considered irrelevant by the system (Luhmann 1995: 261-262). This is the moment when inequality does not explain anything, with those people, “there is nothing to exploit” (Luhmann 1997: 70). They fall outside the



semantic space where concepts such as poverty or marginality offer interpretations that help to understand them. They are outside of society. Exclusions are accumulative; if you have no money, you cannot pay the school of your children who will have problems to find a regular job with social security and health care, access to legal services, etc. It is only on the internal side of the system's boundary that inequality applies. There, "functional differentiation presupposes equality and creates inequality." (Luhmann 1982: 134) The functionally differentiated society reduces everyone to elements deemed relevant by the different systems, for instance, for the economic system, the only important factor is the ability to pay. Obviously, the system works best "if everybody is included on the base of equal opportunity in each functional subsystem" (Luhmann 1982: 134). However, functional systems work with differences and therefore are likely to increase them. So, if you are included, inequality does apply to your position and will increasingly do so. A small difference in education at a young age can translate to a big difference later on, a small debt can complicate the participation in the market and therefore become bigger, and so on. As there is no superior instance of control, but a multitude of autonomous and separated systems, society itself cannot use these differences adequately (Luhmann 1982: 134). The different systems have a memory function that remembers the inclusion or exclusion, and, if included, the unequal position of the person or entity that produces communications. They construct "identities for re-impregnating recurring events." (Luhmann 1997: 71) So, if you were excluded once, the system in question will act in correspondence to this fact. Just think of the problems to access a credit if you do not appear in the data banks of the bank of your choice or the problems if you want to continue a university career interrupted long ago.

Exclusion and modernity in the Global South

This systematic exclusion was consolidated when the functionally differentiated modern society came into existence. While the time before the late 18th and early 19th century was marked by imperfect functional systems that did not have complete autonomy to decide their rules of inclusion or exclusion, the beginning of a formally liberal world society is also the beginning of autonomous political, economic, etc., systems. It is now when exclusion becomes systematic, that is, produced by functional systems. Now, the decision between inclusion and exclusion of communications depends entirely on the system in question – and not on the belonging to a certain ethnic, religious, economic, etc., group. In other words, exclusion becomes a decision and with that a weapon that can be used by the system as such or by groups that can control -of course, partially- the system.



The liberal principals of universalism, rationality and individualism spread worldwide in the 19th century. However, they worked differently in the Global South than they did in Europe. “[I]n Latin America, these principles historically combined in contradictory ways with other principles aimed at ensuring social and political exclusion and even control over the definition of what counts as political in extremely inequitable and hierarchical societies.” (Alvarez/Dagnino/Escobar 1998: 9) Liberalism served to exclude people. As, for instance, ethnic legislation was reduced or abolished and replaced by laws that defined literacy or property of land as requisite to the right to vote, indigenous and black people were not excluded because of race or culture, but because of criteria inherent to capitalism. Liberalism turned into “a means of maintaining exclusionary political power, insofar as it was built upon and coexisted with an oligarchic conception of politics, transferred from the social and political practices of Latifundio [...], where personal, social, and political power overlapped, constituting one and the same reality.” (Alvarez/Dagnino/Escobar 1998: 9) Political rule did not forward modernization understood as functional differentiation -as was the explicit program of liberalism- but rather was committed “to the deeply rooted social authoritarianism pervading the exclusionary organization of Latin American societies and cultures.” (Alvarez/Dagnino/Escobar 1998: 10) Politics, in this sense, is understood as a means of first exclusion and then oppression and not as a means of creation of collectively binding decisions. The historical embeddedness of state and class structures in the Global South (Davis 1999: 598-599) perpetuates the necessity of exclusion as a means to maintain politics as it is. Politics is far from an interchange of arguments, it is the legitimation of the existing order. Therefore, many social movements in the Global South “confront authoritarian culture through a resignifying of notions as rights, public and private spaces, forms of sociability, ethics, equality and difference, and so on. These multiple processes of resignification clearly reveal alternative definitions to what counts as political.” (Alvarez/Dagnino/Escobar 1998: 10) This is necessary because there exists a “breach between cosmopolitan principles of universal inclusion and the dispositions of particularistic administrations or communities.” (Mascareño/Chernilo 2012: 53) The political as such is based on systematic exclusion.

In most regions of the world, particularly in the Global South, it is hard to maintain the idea of a primacy of functional differentiation central to systems theory. Instead, there seems to be a “confusion of differences” (Neves 2012: 23) where particularistic logics of networks of persons complicate the functioning of the systems to a degree that a functional differentiation cannot be considered as given. The increasing complexity of



society in Latin America leads to destructive relations between communications that influence heavily the integration of systems (Neves 2012: 19). The lack of redundancy inside the systems makes a reduction of the complexity of the environment by the system almost impossible (Neves 2012: 20). As social systems in Latin America and the Global South cannot produce a normal mode of functioning, they cannot create adequate mechanisms of observation of their environment. They simply do not understand what happens around them. This leads to a “corruption of systems” (Neves 2012: 21) where the logics of one functional system block or supersede the logics of another one so that there is no clear differentiation of systems as such. You may not know if political communication is needed in a certain situation or economic, legal, etc., communications – maybe even all those communications can apply. The informal networks of favours that are based on functional differentiation obstruct them by the creation of a primary difference between inclusion and exclusion (Luhmann 1995: 257) – but here, inclusion and exclusion into the network of favours that allows an inclusion into functional systems as a second step (Neves 2012: 24). This means that the access to education formally depends on the education system, but informally on who you know. There is an unclear mixture of formal and informal procedures where the informal part is invisibilized. “[T]he system operates informally, but under a veil of formality.” (Mascareño/Chernilo 2012: 54) The exclusion of wide parts of the local population from the functional systems is both consequence and reason for this incomplete functional differentiation (Neves 2012: 22). As a formal participation in functional systems is hard to reach for many people, they rely on informal inclusion through networks of favours. That means that on the side of inclusion “forms of stabilization are established [that] create their own mechanisms of inclusion and exclusion for the maintenance of this network.” (Luhmann 1995: 250)

Exclusion and Space

While the differences of modern society cannot be regional but have to be communicational, it seems that exclusion is especially a problem in “peripheric regions of world society” (Meyer 2012: 101), above all, in rural regions. The excluded are materialized in a certain space from where they can work as environment over the system via an interference (Opitz 2008: 239) that puts the functioning of the system into danger and can provoke an observation of the system towards the excluded. For instance, indigenous peasants that are excluded from politics can be perceived by politics as a potentially revolutionary mass. This logic of regionalized exclusion is visible in the unequal state building in many countries of the Global South. There, “state formation has proceeded quite unevenly, with the state reaching strongly into some



population sectors or geographic regions of its territory while avoiding others.“ (Davis 1999: 598) This has been described as “internal colonialism connected to the evolution of groups that participate in and are marginalized from development” (González Casanova 1969: 249). As colonized societies have been isolated from other societies and cultures, the colonial relationship with the metropolis is reproduced inside the colonized society. The lack of economic, political, cultural integration of the colonized society with world society corresponds with a lack of internal integration (González Casanova 1969: 232-233). Racism as basic mechanism to structure society -and inclusion/exclusion- is the mode of this integration and hinders the constitution of a functionally differentiated society that needs formal equality (González Casanova 1969: 237). The conditions of the colonized and -in part- excluded people are harsh:

“they live in a territory without own government; they are in a situation of inequality in relation to the dominant elites and classes that integrate them; [...] their population does not participate in the highest political and military ranks of the central government [...]; the rights of their population and its economic, political, social and cultural situation are regulated and imposed by the central government; generally, the colonized inside of a Nation-State form part of a different ‘race’, considered ‘inferior’, than that which controls the national government [...]; the majority of the colonized form part of a different culture and they speak a different language than the ‘national’ one.” (González Casanova 2006: 410)

This unequal constitution of state and society leads to uneven politics towards citizens, often outside “juridically guaranteed ways.” (Davis 1999: 600-601) Therefore, we can speak of a crucial factor that structures both exclusion and inequality or that is structured by them: distance. In this sense, “location directly influences the formation, objectives, and strategies of citizens as individuals and collectively in social movements. Still, it is not merely the free-floating concept of location, but also the notion of distance, and in particular the idea of citizens' distance from the state“ (Davis 1999: 601). It is about the distance from “the institutions, practices, policies, procedures, and even discourses of the state in any one or more of four ways: geographic, institutional, cultural, and in terms of class.“ (Davis 1999: 603)

While exclusion does not necessarily has to be related to space, it tends to be. This is because of the politics of exclusion in place since the late middle-ages and completed with means of social disciplinization since the 18th century (Luhmann 1995: 244-245). As this politics of exclusion is produced mainly in the political system that works with territorial borders, exclusion into unmarked spaces would be a probable consequence.



Borders would be the “spatial substratum” (Luhmann 1995: 260) that allows to control excluded bodies. The tight connection of the political system via the state to other functional systems, such as education, medicine, legal system, would perpetuate exclusions, using strategies of legitimization based on a constructed anomaly of the excluded (Luhmann 1995: 242). With a dysfunctional state and functional systems, this would mean that the membership to a network able to control the state would become the main reason for inclusion or exclusion. This corresponds to the high degree of social integration in the sphere of exclusion created by those exclusions (Luhmann 1995: 259-260). Especially in the Global South “big parts of the population are excluded in a very stable manner from every participation in the spheres of services of the functional systems” (Luhmann 1995: 250). However, to describe the spheres of exclusion as secondary stratificatory differentiation (Meyer 2012: 28) would be a step back in the theoretic description of reality (Bohmeyer 2009: 83) – simply, there is no way back to societies of the past. Instead, we should picture an imperfect functional differentiation, where one level of social system -the functional systems- are inaccessible for the excluded. The two remaining levels, that is, organizations and interactions, are what determines sociality in the sphere of exclusion.

The excluded individual

Exclusion means that a given person is irrelevant for the communications of a functional system. The system in question can communicate about this person -of course, not as a person but as a description of the environment of the system- but he or she cannot participate in the communication. In the most direct sense, this person becomes an object of communications of other people (or other social entities). For instance, he or she cannot defend him or herself against accusations (Meyer 2012: 10). For the system in question, the excluded person ceases being a person and becomes part of the environment – not as a potentially social actor, but rather as a body that cannot be addressed socially (Bohmeyer 2009: 73-74): “This society makes very specific distinctions with respect to its environment, e.g. [...] (excluded) bodies and (included) persons with respect to human individuals.” (Luhmann 1997: 74) The excluded individual does not longer offer the potential to be addressed via expectations (Opitz 2008: 237) or act via roles (Meyer 2012: 30) – he or she is treated like a “defective address” (Opitz 2008: 246) that cannot participate in the system but does stabilize it through its existence in the environment of this system. Sociality in exclusion takes different forms, where the body plays an important role (Opitz 2008: 238). Interactions are based on physical presence and individual acquaintance becomes the main form of the social. Sociality



through interactions cannot rely on coded communication and symbolically generalized media of communication such as money, truth, law, or power. This makes a high complexity of communication in the sphere of exclusion improbable. The problem of double contingency, solved inside the system with the form person, re-appears due to the “gradual demedialization of interaction” (Opitz 2008: 249). Now, communications are observable in bodies what makes a certain speed of observation necessary (Luhmann 1995: 262). This leads to a concentration of information in the body and what it can show -for instance, certain styles of cloth-, “the body serves as readable area of personality and thus as medium of reduced formation of expectations.” (Opitz 2008: 250) This liberates mainly physical manifestations of sociality such as violence or unstructured sexuality without connections to a symbolic level such as political power or family, which makes more and complex communication less probable (Luhmann 1995: 262-263).

In this sense, the subaltern and excluded cannot speak (Spivak 1994: 104). Not only can he or she not access the political texts understandable in the system of politics (Spivak 1994: 84) – even worse, he or she cannot communicate at all. “There is no space from which the [...] subaltern subject can speak.” (Spivak 1994: 103) In the context of this article: the subaltern is not able to constitute him-/herself as a person that can communicate within functionally differentiated systems. The only communication the subaltern can produce is an immediate, corporal one – a communication that is understood as menace.

Organizations, social movements and exclusion

The excluded from functional systems cannot rely on the services those systems offer. They have to produce similar services via the creation and maintenance of interaction systems. Those interaction systems can become “informal reciprocal support networks” (Meyer 2012: 10) that allow for an indirect entry into functional systems – you cannot borrow money from a bank, but from your neighbour, for instance. As in the sphere of exclusion “society is tightly integrated, but in a negative way” (Luhmann 1997: 70), this integration could lead to major interactions with other excluded, constructing, at the same time, a negative identity (Luhmann 1997: 71), “curiously sewn together into a transparency by denegations” (Spivak 1994: 75). You are defined through what you are not, through what you cannot do or communicate. But this negative identity makes possible an effect of accumulation. The excluded can become a visible collective that as such can create sufficient irritation for the functional systems so that it is forced to react



(Meyer 2012: 101). The single, excluded peasant may be irrelevant, but a mass of excluded peasants can affect the system from outside.

This negative integration can lead to the creation of solidarity through personal interactions. Solidarity of the excluded is not be thought necessarily as something good for the inclusion side of society:

“Solidarities are in a process of deconstruction and reconstruction that requires the self-distinguishing capacity of social movements or of ethnic or fundamentalist religious groups. And this means, that solidarity consolidates itself within society against others. Solidarity, accepting its own genetic conditions, does not and cannot want truce.”
(Luhmann 1997: 72)

In the context of exclusion, solidarity can only be produced by some form of organization based on interactions. These local organizations are a further step in complexity as they are systems that work with decisions and a membership defined by decisions considering each member (Meyer 2012: 21). They produce decisions from decisions and, by that, can absorb uncertainty (Luhmann 1998: 830). This is especially relevant in the case of the lack of authority typical for the shift from stratification to functional differentiation (Luhmann 1998: 837), and, maybe, for the ‘dysfunctional differentiation’ described earlier for the Global South. Organizations based on interactions -and not primarily on functional systems- could be a solution for the situation of absence of authority in the sphere of exclusion. While there is no access to politics or law, the organization can decide internally over how it should act in relation to its environment. When you do not know how your neighbour will act -because both you and he or she are excluded from the legal system- the organization in which both of you are members can offer an alternative legality. In the sphere of exclusion, organizations could work as substitutes for functional systems (Meyer 2012: 101). As the excluded cannot access symbolic structures beyond their personal environment, the organization of the excluded has to be local – it is an organization of the community that makes decisions concerning the community (Meyer 2012: 84). Therefore, these local organizations based on interactions are the bridge of the excluded to the functional systems. Organizations are able to connect to functional systems due to their exclusive structure based on membership and their mode of communication by decisions (Luhmann 1998: 784-785). While one indigenous peasant by him- or herself may be unable to access the market or credits, a cooperative of indigenous peasants can be able to establish this access – of course, always in relation to the organization as such. If this inclusion via organization is



stabilized, the next step, an individual inclusion, could follow. The education via a non-official community school can allow someone to pursue education in the official educational system – of course, only if the system is open enough. But a critical mass of qualified communications that the system cannot ignore can force the system to re-adapt to its environment. In other terms, if there are many non-official community schools that are well-organized amongst themselves and have many students, the official education system is in danger to lose legitimacy. It will have to act on the non-official competence.

In this sense, the local organization can collaborate with other local organizations, becoming a regional or national organization in which the local organization never loses its autonomy. These bigger organizations, still consisting mostly of excluded individuals, are able to communicate decisions to the political or legal system. They can communicate demands. Therefore, they tend to form social movements that have a radically different base than those of the Global North. They are not social movements in the sense of Northern theory, nor those criticised by Luhmann who claims -in relation to the social movements in Germany of the 1970s and 1980s- that they are not organizations because they organize motives and not decisions, lack centrality, and have an infinite need of personal (Luhmann 1998: 850-851). The organizations of the excluded combine the typical work of organizations with the regular presentation of demands and mobilizations to push for them.

This could be one connection to traditional social movement theory. Here, social movements as “preference structures directed toward social change” (McCarthy/Zald 1977: 1218) are manifest in social movement organizations (SMO). This type of organization is to be understood as “a complex, or formal, organization which identifies its goals with the preferences of a social movement [...] and attempts to implement these goals” (McCarthy/Zald 1977: 1218). At the same time, a SMO can represent and shape “broadly held preferences and diverse subpreferences of the social movement” (McCarthy/Zald 1977: 1218) – this means that social movements consists typically of more than one SMO (McCarthy/Zald 1977: 1219). SMOs of the excluded may be defined by their wish to change society -so that they can be included- but, at the same time, they do provide individuals with regular services, something that in theory corresponds to bureaucracy (Zald/Ash 1966: 329). This double characteristic of social movements of the excluded lead to a situation where the attitude of society is relevant during mobilizations but not for the maintenance of organizations (Zald/Ash 1966: 330) As a classical text defines: “The more insulated an organization is by exclusive membership requirements



and goals aimed at changing individuals, the less susceptible it is to pressures for organizational maintenance or general goal transformation.” (Zald/Ash 1966: 332) This ties the organization closely to its members. It must try to adapt to the changes in grievances in the community it represents. If it is not able to provide a certain degree of inclusion or alternative services that correspond with functional systems, the organization would be abandoned quickly. Therefore, it would be a misunderstanding to exclude the ‘bureaucratic’ aspects of the social movement organizations in the periphery of the Global South – they are and must be both: providers of services and political actors that press for changes.

The excluded can become political actors and create for themselves and through their organization a space from which to speak (Spivak 1994: 103) and even own political texts that are different from yet compatible to politics as it is. The step towards the self-creation as political actors in organizations is based on the negative identity of the excluded, slowly translated into a positive identity. This happens in contraposition to the self-images produced inside society and state. Therefore, the inclusion of the excluded via organizations leads to increasing struggles, amongst them “cultural struggles [...] frequently waged on the battlefields determined by the state.” (Davis 1999: 616) This means that “the ‘true’ subaltern group, whose identity is its difference” (Spivak 1994: 80) suddenly has to assume a positive identity, defined inside society. The absolute other becomes just another part of society. This could explain the mixture of radical proposals, such as plurinationality or *Buen Vivir/Sumak Kawsay*, with a straightforward fight for territorial autonomy (Escobar 2010: 40-41). The more radical “claims are usually taken as ‘beliefs’” (Escobar 2010: 40), not simply out of racism or classism, but because of the breach between the negative identity of the excluded (that cannot speak) and the positive, but assigned, identity of the recently included (that can speak, but only partially its own language). This assignment of a position from which to speak from must be considered “epistemic violence” (Spivak 1994: 76) – the inclusion of the excluded through organization does change society, but not necessarily in a complete manner. By inclusion, the excluded acquire the right to be poor, discriminated against, and exploited.

Conclusion

The distinction between inclusion and exclusion into functional systems defines modern society even before inequality becomes an issue. Especially the Global South has been marked by the exclusion of big parts of the population from functional systems, due, in part, to a dysfunctional differentiation, dominated by groups that tried to maintain an



exclusion that serves them well. This structural and often spatial exclusion produces a major integration of the excluded and creates the necessity for them to interact in order to access the services the functional systems won't provide. This could be the basis for the creation of local organizations based on interactions. These organizations can, on a first level, offer alternatives for the services of the functional systems. They make it possible for the excluded to include themselves through self-organization and access money, power, truth, and other media of communication. On a second level, these organizations form part of influential social movements, pushing not only for inclusion but also for a change of the exclusive society. This mobilization is based on the shift from the negative identity of the excluded to a positive identity within society that is not entirely self-defined. In other words, "global neglect stimulates the search for personal and social, ethnic or religious identities." (Luhmann 1997: 73) The positive identities are defined in communicational logics that are not up to the peoples searching identity.

One can wonder if labour movements and cooperatives in the Global North did the same thing long time ago. They were organizations of the excluded opening possibilities of inclusion and leading to a different structure in state and society. And by doing this, they created new identities and positions to speak from. Functionally differentiated modernity is, from this perspective, product of the constant self-inclusion through organization. Without those attempts, maybe functional differentiation would work less well even in the Global North. Including all three types of social systems in our analysis is necessary to understand the complexity of society.

Instead of reducing the scope of research to the inclusion-side of society, a study of the mechanisms of self-inclusion through organization could help to understand more completely how social movements in the Global South work. At the same time, this study would offer insights on the structure of society under conditions of constant shifts. It is, indeed, a form of epistemic violence to invisibilize those aspects that do not fit a theoretical framework based on experiences of the Global North. An analysis of how inclusion works through organization could also offer answers to the marginalization of the more radical proposals of the correspondent social movements – some demands do not correspond with political communication. If this mismatch is repeated in research, the self-including excluded get excluded again, this time, through academia.

Literature

Alvarez, Sonia/Dagnino, Evelina/Escobar, Arturo (1998): *The Cultural and the Political in Latin American Social Movements*, in: Alvarez, Sonia/Dagnino, Evelina/Escobar,



- Arturo (eds.): *Cultures of Politics/Politics of Cultures. Re-visioning Latin American Social Movements*, Boulder: Westview Press, 1-29.
- Bohmeyer, Axel (2009): *Inklusion und Exklusion in systemtheoretischer Perspektive*, jcsw 5: 63-89.
- Davis, Diane (1999): *The Power of Distance: Re-Theorizing Social Movements in Latin America*, *Theory and Society* 28(5), 585-638.
- Escobar, Arturo (2010): *Latin America at a crossroads*, *Cultural Studies*, 24(1), 1-65, <http://dx.doi.org/10.1080/09502380903424208>
- González Casanova, Pablo (1969): *Sociología de la explotación*, México: Siglo XXI.
- González Casanova, Pablo (2006): *Colonialismo interno [una redefinición]*, in: Boron, Atilio/Amadeo, Javier/González, Sabrina (eds.): *La teoría marxista hoy*, Buenos Aires: CLACSO, 409-434.
- Luhmann, Niklas (1977): *Differentiation of Society*, *The Canadian Journal of Sociology* 2(1), 29-53.
- Luhmann, Niklas (1982): *The World Society as a Social System*, *International Journal of General Systems* 8(3), 131-138.
- Luhmann, Niklas (1995): *Inklusion und Exklusion*, in: Luhmann, Niklas: *Soziologische Aufklärung* 6, Opladen: Westdt. Verl., 237-264.
- Luhmann, Niklas (1997): *Globalization or World society: How to conceive of modern society?*, *International Review of Sociology*, 7(1), 67-79.
- Luhmann, Niklas (1998): *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Mascareño, Aldo; Chernilo, Daniel (2012): *Obstáculos y perspectivas de la sociología latinoamericana: universalismo normativo y diferenciación funcional*, in: Estrada Saavedra, Marco; Millán, René (eds.): *La teoría de los sistemas de Niklas Luhmann a prueba*, México: UNAM, Colegio de México, 25-68.
- Meyer, André (2012): *Der Exklusionsbegriff in der Systemtheorie Niklas Luhmanns – Eine Überprüfung seiner Erklärungsleistung am Beispiel der Favelas Rio de Janeiros*, *SocialWorld – Working Paper* No. 18.
- McCarthy, John/Zald, Mayer (1977): *Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory*, *American Journal of Sociology* 82(6), 1212-1241.
- Neves, Marcelo (2012): *Komplexitätssteigerung unter mangelhafter funktionaler Differenzierung*, in: Peter Birle, Matias Dewey, Aldo Mascareño (eds.): *Durch Luhmanns Brille Herausforderungen an Politik und Recht in Lateinamerika und in der Weltgesellschaft*, Wiesbaden: Springer, 17-27.



Opitz, Sven (2008): Die Materialität der Exklusion: Vom ausgeschlossenen Körper zum Körper des Ausgeschlossenen, *Soziale Systeme* 14(2), 229-253

Spivak, Gayatri Chakravorty (1994): "Can the Subaltern Speak?", in: Patrick Williams/Laura Chrisman (eds.), *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*, New York: Harvester/Wheatsheaf, 66-111.

Wallerstein, Immanuel (2004): *World-Systems Analysis. An Introduction*, Durham/London: Duke University Press.

Zald, Mayer/Ash, Roberta (1966): Social Movement Organizations: Growth, Decay and Change, *Social Forces* 44(3), 327-341.



Movilizaciones comunales, subjetividades políticas y colonialismo contemporáneo en Cajamarca Perú.

Donatto Badillo Cuevas

Resumen

En éste escrito se presenta una revisión crítica y detenida de la relación entre la movilización social, las subjetividades políticas y el colonialismo contemporáneo en las últimas dos décadas en la zona central de los andes de Cajamarca Perú. Se exponen los resultados de investigación en torno a las prácticas, significaciones, medios y horizontes internos cuando las comunidades andinas luchan por sus medios de vida, así como éste entramado configura prácticas contra-coloniales.

Palabras clave

Movilizaciones comunales; Subjetividades políticas; Colonialismo contemporáneo; Prácticas contra-coloniales.

Introducción

Este trabajo es el resultado de una síntesis crítica y analítica de mi tesis de maestría en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que lleva por título “Movilizaciones comunales y horizonte autónomo en Cajamarca, Perú (2001-2014)”.

Lo que presento a continuación es una configuración de entendimiento de las “movilizaciones sociales” a partir de la comprensión de ciertas “subjetividades políticas” frente a las renovadas formas de colonialismo interno.

En las movilizaciones contra la minería en las últimas dos décadas en los andes cajamarquinos, se han reinventado prácticas comunitarias, significaciones y herramientas de lucha que prefiguran horizontes autonómicos frente al Estado y a las corporaciones transnacionales; se han abierto posibilidades de transformación desde la capacidad deliberativa de las comunidades, en un primer ciclo –entre el 2000 y 2009– para reorganizarse y disputar derechos perdidos a consecuencia del conflicto armado interno, en un segundo ciclo –iniciado desde el 2009– para re-tejer una red diferenciada de compartición y colaboración como base, no sólo frente a la contingencia que representa la minería, sino para reconstituir sus propias formas de vida desde sus intereses, que representa un proceso de democratización interna y formas de



organización horizontales, además de un reconocimiento de pluralidad y semejanza de luchas, algunas han alcanzado autonomía material y política.

Haciendo mención de las luchas referentes en este segundo ciclo de movilizaciones a nivel nacional están las protestas en contra de proyectos extractivos, en los que destacan Bagua (2009) en la selva Amazónica, las protestas contra la minería Majaz en San Ignacio, Jaén (Departamento de Cajamarca), Huancabamba y Ayabaca (Departamento de Piura) en el año 2010, las movilizaciones contra el proyecto minero Conga en Celendín y Bambamarca (Departamento de Cajamarca) entre 2011 y 2012, en Chumvivilcas (Cusco) contra el proyecto minero Anabi (2016) y en Cotabambas (Apurímac) contra el proyecto minero Las Bambas, además de las movilizaciones juveniles y feministas en la ciudad del país.

Las formas de dominación y colonialismo interno se han visto modificadas con el neoliberalismo, una de las principales estrategias ha sido la desarticulación de comunidades, con el objetivo de que sus territorialidades sean incorporadas al mercado capitalista mundial, en este sentido, una pregunta subyacente de este escrito es: ¿cuáles y cómo son los elementos y situaciones que van fragmentando las amplias redes comunitarias que luchan en contra del despojo y van más allá del Estado y el capital?, algunas respuestas han sido a través de una extrema violencia que se conjuga con un aparato estatal de mediación disuasiva para la configuración de un cuerpo social *ad hoc* al discurso desarrollista, y que se complejiza con la existencia de una cultura política que ha sido proclive a la ruptura del tejido comunitario.

Fundamentación del problema

En esta intervención me propongo exponer una síntesis estratégica para la comprensión de las movilizaciones comunales en contra de la mega-minería en las provincias de Cajamarca, Bambamarca, Celendín y La Encañada, en la zona central de los andes de Cajamarca; disputa que también es con y por las subjetividades en contra de un colonialismo contemporáneo que amenaza la profundidad de las relaciones comunitarias, las cuales son la base de la reproducción y lucha por la vida en los pueblos andinos.

Y digo que es una síntesis estratégica por que la entiendo como unan “producción práctica y reflexiva de personas situadas socialmente, que asumen determinadas intencionalidades políticas sean éstas explícitamente señaladas o implícitamente asumidas, [...] auspicia la comprensión práctica del acontecimiento social de quiebre,



resistencia e impugnación al orden social por aquellos que lo producen” (Gutiérrez, 2008:16).

Este planteamiento proviene de dos objetivos generales: 1) comprender las prácticas comunitarias en el campo político, sus significaciones y medios que están en los tiempos de revuelta social en las comunidades Cajamarquinas, de las y los agricultores Llaucas de Bambamarca y Celendín; 2) así como buscar la inteligibilidad de sus propuestas y horizontes internos cuando se lucha y que prefiguran formas de vida autónoma distintos a los dominantes implantados por el capitalismo.

Hay un vínculo inseparable entre las movilizaciones comunales y un tipo de subjetividad que subyace de la ruptura de lo cotidiano, en donde se formulan y perciben posibilidades comunes que trastocan las relaciones de dominación y explotación, sin embargo, la transformación social se inter-genera entre la configuración cotidiana de subjetividades políticas y la posibilidad de quiebre con esa cotidianidad.

De esta manera, una primera respuesta o hipótesis al planteamiento anterior es que entre las prácticas comunitarias en los tiempos de movilización están formas reinventadas de *mita* y *mink'a*, es obvio que nos son la únicas, también se pueden ver formas de *pararaico*, *landaruto*, *bota luto*, chacra, asambleas, canciones, intercambio de productos locales, bloqueos carreteros, toma de plazas y marchas que forman parte de la lucha comunal, pero el análisis que tejó esta investigación se concentra en las primeras como eje que articula a las segundas, es decir, la reciprocidad en el trabajo colectivo y la organización por turnos son la base de las fiestas, tradiciones en el habitar, crianza de la tierra y de la lucha por los bienes comunes.

Estas prácticas tienen como significados hacer respetar el ciclo de la vida y disfrutar a plenitud la existencia, por la autonomía alimentaria y un nuevo orden societario en armonía con la naturaleza en que se garantice la justicia y equidad.

Metodología

Este trabajo se inscribe en un horizonte latinoamericanista inter y tras-disciplinario de análisis y comprensión de la sociedad Andina, parte de la apuesta de producción del ámbito comunitario campesino e indígena que se vincula con procesos históricos, económicos, políticos y culturales continentales. Según Sergio Vilar (1997: 29-32) las palabras inter y trans aluden a relaciones recíprocas, de cooperación, interpenetración e intercambio, hacen referencia a una fertilización cruzada de métodos y conocimientos específicos o disciplinares hacia una integración ampliada del saber, para la creación



de nuevas propuestas abiertas a un porvenir-devenir, se promueve una confluencia de unos conocimientos con otros o de sensibilidades diversas.

Esta investigación es el resultado del vínculo entre distintos campos de conocimientos: la historia como pauta básica para fundar el estudio de los procesos de movilización comunitaria contra el despojo de los bienes comunes, determinaciones que ocurren en los procesos y formaciones económicas mundiales, frente a esto se estudian las alternativas políticas y sociales en la región, las prácticas cotidianas de las comunidades resultan estratégicas en la lucha.

Se busca aportar a la construcción de la categoría “comunitaria” frente al antagonismo social del despojo capitalista de los bienes naturales en y desde la región Andina, apuesta que se construye principalmente en las prácticas, significaciones y herramientas reinventadas de los que luchan por la vida y prefiguran horizontes de autonomía y comunidad.

Para sustentar estas hipótesis se propone una estrategia metodológica que subyace interpelando a la idea de uno de los aportes centrales del discurso de Marx a la comprensión de la sociedad moderna, está en el descubrimiento y análisis crítico de un comportamiento estructurador de la vida social en el plano básico de la economía: el concepto de producción en general, considerado como proceso completo de reproducción social, el cual es un principio particular de organización de la vida social que le otorga a una sociedad su peculiaridad como figura concreta o identidad, pero incompleta y entregada a la libertad; la vida social o el sujeto social “consiste así en la capacidad de construir la concreción de la socialidad” (Echeverría, 2012:167), de fundar y re-fundar ese principio de organización.

Tomando en cuenta las movilizaciones comunitarias como principio particular de organización de la vida, como un proceso de producción –organizada o espontánea–, da forma con sus múltiples intenciones transformativas a su socialidad, las acciones llevadas a cabo en la colectividad son prácticas de carácter político que crean posibilidades de instrumentalizar la lucha, es decir, prácticas que perduren, den forma y continuidad a la socialidad histórica de su existencia.

Así, en las movilizaciones comunitarias, consideradas como proceso de producción social, se manifiesta una dimensión semiótica, un producir y consumir significaciones, producir es comunicar y consumir es interpretar; la movilización produce significaciones e interpretaciones. La dimensión propiamente semiótica en la movilización social, como



en el proceso práctico de producción en general, se encuentra en el lenguaje (Echeverría, 2012).

La guía concreta de análisis consistió en recabar datos de las prácticas comunitarias que subyacieron en los tiempos de quiebre social desde las movilizaciones comunitarias en Cajamarca desde el año 2001 hasta el año 2014, así como las significaciones-interpretaciones propias del campo semiótico de los comunicados, declaraciones y entrevistas de las campesinas y campesinos que resisten; así pues, la plataforma documental se divide en tres: 1) los diarios de campo, archivos fotográficos, entrevistas y notas periodísticas de las acciones directas en los tiempos de movilización, 2) los comunicados y declaraciones de las organizaciones sociales y campesinas de la región Cajamarca que se producen en los momentos de movilización y preparación de la acción (publicados en diarios locales y regionales) y, 3) la semiótica que se produce en los tiempos de reflujo y que funciona como balance de la lucha (entrevistas colectivas y talleres de sistematización de la lucha).

El tratamiento de los datos se realiza a partir del esquema de explicación de la producción en general de Marx, las prácticas comunitarias en lo político como proceso de producción en general, que es parecido a la reproducción a la materia viviente de un organismo vivo, la comunidad es una totalidad parcial que enfrenta a una totalidad global de la naturaleza para recibir de ella una respuesta favorable para su organización.

Fue apremiante convivir diariamente en las comunidades, hacer un diario de campo, un cuerpo documental fotográfico, conversar con distintos sujetos-organizaciones y reconocer acciones en la vida cotidiana y en los momentos de revuelta social para la comprensión semiótica de las prácticas comunitarias, la investigación se realizó en campo en un tiempo social de descenso y balance de la lucha, cuando las movilizaciones, los principales comunicados y declaraciones públicas de las organizaciones ya se habían realizado, en este sentido, la labor metodológica consistió en recabar aquellos documentos, ordenarlos y hacer un análisis microscópico de datos en referencia a la estrategia teórica.

El plano básico de interpretación semiótica de la movilización comunitaria en la investigación realizada parte de la construcción de una estrategia teórica, que permitió sistematizar las prácticas comunitarias y sus significaciones de las experiencias en las movilizaciones y plantear prefiguraciones reconociendo los horizontes internos en los movimientos sociales.



El planteamiento teórico inicial parte de las prácticas de resistencia comunal y las que se inscriben en nuevas prácticas de vida que prefiguren y contengan horizontes de emancipación u otras formas de vivenciar con la madre tierra.

La estrategia teórica en este trabajo se detiene a revisar los contenidos de las prácticas, significaciones y horizontes interiores comunitarios para comprender los momentos de movilización social en Cajamarca, Bambamarca y las alturas de las lagunas –luchas y levantamientos sucedidas entre el 2011 y 2014–, tiempos que son parte de una historicidad de quiebres sociales. Las premisas, conceptos y argumentos que construyen la matriz explicativa que se presentan no se inscriben en un canon de pensamiento teórico, pero sí atienden a propuestas colectivas que han deseado, producido y pensado críticamente la emancipación social en el Perú.

Resultados y discusión

La minería en Perú es un polo estratégico para la acumulación ampliada de capital, Yanacocha es una empresa de extracción de oro y plata, una de las más grandes en América Latina, constituida principalmente por capital estadounidense de la empresa Newmont Mining Corporation, aunque aproximadamente una tercera parte se divide entre: la Corporación de Financiamiento Internacional del Banco Mundial (BM) y la empresa Minas Buenaventura del magnate peruano Roque Benavides.

La minera Yanacocha es un buen ejemplo para hacer un planteamiento general de las nuevas formas de acumulación capitalista, principalmente basadas en proyectos de dominación, control, extracción y sobre-explotación intensiva y extensiva de bienes sociales y naturales: cuerpos, minerales, hidrocarburos, agua, biomasa, alimentos, agroindustria, aire, sin mayor valor agregado y demandados cada vez más por países centrales y emergentes bajo la organización espacial de infraestructuras físicas y sociales en todo el sur global, considerado objeto-arrabal de materia prima para el placer hedonista de un norte que busca representar el desarrollo tecnológico e industrial.

Las nuevas formas de acumulación en gran parte se instrumentan bajo reformas estatales en los países latinoamericanos orquestados generalmente por el BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la masiva inversión extranjera y la privatización de empresas estatales, instaurando normas legales inconstitucionales para robar organizada y sistemáticamente los fondos públicos provenientes de las privatizaciones –tal como pasó con el gobierno autoritario de Alberto Fujimori–, así como la reconcentración de toma de decisiones en un grupo de poder en el Estado, y por



supuesto, la abrumadora concentración y destrucción de tierras campesinas e indígenas como mercancías reservadas en el ciclo de re-producción capitalista.

Sin embargo, estas formas de acumulación y continuidad neoliberal paralelamente se instrumentan a partir del uso monopólico de la violencia, ordinariamente exacerbada, de este modo, la guerra contra insurgente, la represión y la criminalización de la protesta social funciona como una avanzada para que sean realizadas las inversiones privadas, la militarización les resulta fundamental, así como componentes paralegales de crimen organizado y corrupción generalizada.

Una dominación que está en la base del sistema dominante es la re-actualización incesante del colonialismo interno, por una parte puede ser vista como una aceptación en el cuerpo social de una visión dominante de desarrollo que tiene como fin la acumulación económica, considerada como principal factor de bienestar; genera un orden discursivo construido con un lenguaje “empresarial” adoptado como opción política y civilizatoria que se combina con una violencia dirigida por un diagrama de poder de una supuesta superioridad sobre una supuesta inferioridad. Es la negación y deshumanización de los pueblos andinos mediante la imposición de una identidad vertical y proclive, inicialmente afirmada como mano de obra barata con el objetivo de la extracción de plusvalor, pero también para debilitar las formas comunales de la organización de la vida.

El colonialismo contemporáneo es una reactualización de un largo proceso de enajenación de los medios y formas de vida propias de los pueblos campesinos e indígenas, lanzada desde una red de complicidad y corrupción que atraviesa a los distintos órdenes de gobierno en el Estado y las corporaciones empresariales, enmarcadas en relaciones altamente jerarquizadas, desde ahí se proyectan sistemáticamente estrategias para la configuración de identidades *ad hoc* al discurso desarrollista, muchas veces por medio de las políticas de combate a la pobreza, así como territorializada en créditos, clientelismo y la imposición de la urbanización desbocada como una forma de vida superior y deseable.

En Perú, el proyecto político de descentralización iniciado por el Estado desde el año 2001 como proceso de “democratización” ha funcionado como un dispositivo de reactualización colonialista. Es la reestructuración del poder estatal para llegar a órganos de gobiernos locales, reorientar la conducción de la economía nacional hacia el logro simultáneo de mayor competitividad, generar de empleos, superar la pobreza y exclusión de la economía; para lograr esto, desde el Estado, se planea la transferencia



de funciones y facultad de decisión en los aspectos políticos, económicos y administrativos del centro a la periferia, es decir, trasladar competencias a unidades sub-nacionales pero subordinadas al aparato estatal que se superpone no sólo constitucionalmente en la toma de decisiones, es un fomento a la democracia representativa, al impulso de crecimiento económico, desarrollo y eficacia en el uso de recursos para conseguir esos objetivos. La política de descentralización desde el Estado es una correa de transmisión de nuevos centros de comando, es la imposición de un proyecto de sociedad que hay que alcanzar “inevitablemente” mediante la cuantificación económica, no es en ningún momento el respeto y reconocimiento a las formas cualitativas diversas de vida, de ser y hacer en sociedad, no se toma en cuenta la capacidad social histórica de autogestión, autonomía y horizontes culturales de cada pueblo y región.

Entonces, el colonialismo interno se puede ver como una exacerbación del individualismo y de la internalización fetichista del dinero, así como en ocupar estrategias para configurar la creencia de que la capacidad de decidir los asuntos de la vida en sociedad pertenece en calidad de monopolio a una clase política centrada principalmente en el Estado y en los varones, para someter a la sociedad a prácticas estatales desarrollistas; para Raúl Zibechi (2010) estas políticas sociales implican cuatro grandes problemas para los movimientos anti-sistémicos: 1) instalan la pobreza como problema y sacan a la riqueza del campo visual: ocultando el problema central que es la acumulación de capital y de poder de un polo, 2) eluden los cambios estructurales, congelan la desigualdad y consolidan el poder de las élites, 3) bloquean el conflicto para facilitar la acumulación de capital: todas las políticas sociales están enfocadas a mostrar que solo se pueden conseguir demandas sin conflicto, privilegian dar beneficios a quienes están más ligados al Estado y las empresas, así fortalece el clientelismo, cooptan a los movimientos y organizaciones y reducen su potencial de lucha.

El colonialismo interno disputa al ámbito comunitario de la vida los pueblos andinos, una forma ha sido la proletarización y fragmentación territorial de las comunidades, por ejemplo, mediante la instalación de un orden jurídico en la tenencia de la tierra centrada en los hombres y en el Estado, situación que generaliza una noción de patria potestad y patrimonial del territorio como política excluyente de las mujeres y las diferencias disidentes, ha constituido históricamente una clase patricentrada bajo una racionalidad mercantil, que segrega y aleja a los miembros de la comunidad cuando se suspenden las relaciones de colaboración y compartición extensas.



Sin embargo, el colonialismo como dispositivo de dominación no alcanza para cerrar totalmente las nuevas formas de acumulación capitalista, el poder económico y político está girando hacia un punto de extremismo *fascistoide*. Las resistencias y subversiones contra este sistema son habilitadas de manera potente, aunque no en pocos casos contradictoria.

He identificado en las movilizaciones sociales en contra de la avanzada de los nuevos modelos de acumulación capitalista en Cajamarca un horizonte democrático-representativo, yuxtapuesto a otro horizonte de entramado comunitario, ambos se revuelven y modifican en el contexto real y concreto de las luchas, pero son distinguibles uno del otro.

El horizonte democrático representativo se volvió nítido en las movilizaciones contra la minera Yanacocha de 2001 y 2004, y contra el proyecto minero Conga de 2011 y 2012 en Cajamarca, surge como estrategia de lucha para la regionalización política y económica frente al gobierno central, mediante la ocupación de estructuras estatales regionales generalmente dirigida por una clase en la vanguardia, y que –quiero remarcar– está atravesada por una idea de desarrollo privado en el sector agropecuario.

Remarco esto porque no sólo una vez en éste horizonte se han vislumbrado comportamientos ortodoxos que han contribuido a reducir la capacidad comunitaria de los pueblos y las movilizaciones en defensa de la vida, desde ese lugar muchas veces se ha insistido en instaurar personajes ilustres o gobiernos prodigiosos que por su cercanía a la idea desarrollista y vulnerabilidad con el gobierno central, han terminado –aunque no siempre o en todos los casos– por adoptar prácticas poco éticas con las comunidades; configurados como órganos reducidos con importante labor directriz que sirven como agentes de formación de cuadros en tiempos coyunturales, buscan a través de un plan estratégico elevar la conciencia y acción de las comunidades campesinas, a fin de que se consoliden más órganos superiores para consolidar partidos políticos y conseguir un cuerpo social en el Estado, creando como consecuencia nuevas divisiones al interior de las comunidades, específicamente aperturando conflictos en la toma de decisiones y actualizando el peligro de desgarramiento al interior de las comunidades.

Este horizonte ha llevado a una especie de centralización que resulta funcional al colonialismo contemporáneo, y es que para conseguir el poder en el Estado se llega a una competencia de liderazgos muy acotados en participación y marcadamente masculinos, como grupo dirigencial de profesionales de partidos políticos y Fretes con



una composición organizativa jerarquizada en la ocupación de cargos, y permeados por las políticas públicas centrales.

Pasando a otro tema y pensando desde otro lugar de enunciación y resistencia frente a la avanzada de las nuevas formas de acumulación capitalista, el horizonte comunitario se puede reconocer a partir de la relación intrínseca entre las subjetividades políticas ubicadas en extensas redes comunitarias y las movilizaciones que se produjeron en los últimos veinte años en la región, es una relación de complementariedad. Con las movilizaciones se han abierto nuevos caminos para la transformación social, cosa que ha sido posible gracias al cultivo crítico que las comunidades campesinas han hecho de sus subjetividades políticas, las movilizaciones comunales han sido momentos importantes en donde se han producido nuevos horizontes inter-subjetivos.

Las movilizaciones comunales, aquellos bloqueos, marchas, acampadas, protestas, asambleas, reuniones, conferencias, etcétera, que se han desplegado en la defensa de las territorialidades andinas –lagunas, bojedales, ríos, chacras, puquios, montañas, significados, afectos y demás medios de vida campesina– contra la minería e hidroeléctricas, son una energía social con una fluidez que disputa al orden social dominante, al Estado peruano, a las empresas capitalistas y al colonialismo contemporáneo. Aunque resulte paradójico, ésta misma fluidez pone en riesgo las prácticas de existencia social de las mismas comunidades que luchan, y por ésta circunstancia abre un abanico de transformación social, específicamente para desmontar ciertos diagramas de dominación que cruzan por las relaciones comunitarias.

Tanto las subjetividades políticas de los pueblos andinos en lucha como las tramas de movilización comunal tiene por lo menos cuatro campos de entendimiento no divididos: a) las prácticas comunitarias de compartición, colaboración y rotación, b) las significaciones que desde las amplias redes comunitarias les otorgan a esas prácticas, que se hacen tangibles en el ámbito discursivo y anuncian horizontes de deseo diferenciado, c) las herramientas que son usadas para darle permanencia y continuidad a dichas prácticas, y d) los entramados afectivos que se van tejiendo entre sentidos, sentimientos y emociones con ciertos ámbitos discursivos. Estos cuatro campos son expresión diferenciada de un mismo acontecimiento y experiencia, su relación es complementaria y co-dependiente (Echeverría, 2010; Echeverría, 2012).

De ésta manera, las subjetividades políticas a las que hago referencia en las movilizaciones comunales son prácticas-significaciones-herramientas-afectividades de



colaboración, compartición y rotación con capacidades de dar forma a la propia vida con autonomía, para construir la concreción de la vida social, aunque con efectividad inmediata, transitoria y entregada a la libertad.

Aquí hago referencia a una relativa autonomía frente al Estado y las corporaciones capitalistas desde amplias redes comunitarias como un despliegue de lo político comunitario, a través de acciones directas sostenidas por redes comunitarias, en donde el centro articulador es la lucha de las mujeres.

La figura de lo político comunitario es la capacidad de decidir, de fundar o alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de darle forma, de preparar la acción transformadora de la institucionalidad social, y acontece en el momento extraordinario de la vida social (Bolívar Echeverría, 2012).

Para Bolívar Echeverría (2010) el momento extraordinario es una temporalidad que se diferencia de los momentos rutinarios, la capacidad política es exigida al máximo para tomar decisiones radicales para mantenerse o transformarse, puede caer en la revolución o la barbarie; puede entrar en un proceso de rescate vía disminución cualitativa de su socialidad, de regresión salvadora, o caer en el temor de desmoronamiento de las prácticas comunitarias o en la reconstitución de esas prácticas. En el momento rutinario sólo se da el cumplimiento de las normas establecidas en la comunidad, pero al mismo tiempo va preparando el momento de quiebre, en el tiempo extraordinario se cuestionan estas prácticas, en la vida cotidiana también puede existir una rutinización del momento extraordinario o un simulacro de aquel, es decir que, las instituciones que son resultado de ese momento de quiebre, van re-construyendo una identidad inerte o detenida en aquel momento; para Echeverría en las comunidades originarias no hay una distinción clara entre el momento extraordinario y el cotidiano, pues tanto la realización plena como la catástrofe están en juego, en donde el momento extraordinario subordina al cotidiano, lo que hace estar a las comunidades en permanente espontaneidad, emergencia, arriesgue y creatividad.

Las redes comunitarias en Cajamarca por lo regular están articuladas en Rondas Campesinas, su unidad básica es una comunidad, cada centro poblado o caserío tiene una base rondera, que incluso puede tener su propio estatuto (amparado legalmente en la Ley de Rondas No. 27908), su máxima autoridad es la Asamblea Comunal y la Junta Directiva, la articulación con otras bases ronderas conforman Federaciones o Centrales Únicas, que pueden abarcar varias provincias y regiones en el país.



Las redes comunitarias son vínculos extensos de parentesco bilateral que constituyen unidades prácticas, técnicas, semióticas y afectivas en un espacio común: el hogar, la chacra y jalca en un espacio integral, ahí se cuida de los medios de producción y bienes de consumo, a través de un control co-dependiente y recíproco en distintos pisos ecológicos. Estas redes han puesto límites a la mercantilización de la tierra e incentiva ciclos de movilización, generan espacios de autoafirmación, autodelimitación y autodisposición organizativa complementaria y rotativa concreta en sus formas de vida. Mantiene actividades de intercambio de alimentos e información entre distintos pisos ecológicos, la organización de mujeres en éstas redes y mercados inter-zonales son factores claves que permiten la extensión de esas redes.

Estas redes comunitarias configuran una política del cuidado, una forma de deliberar colectivamente y hacer justicia campesina basada en la estima y confianza comunal para defender el derecho a la vida, que tiene como base una economía y ética de subsistencia que garantiza a la colectividad el comer, habitar, aprender, sanar e intercambiar.

De esta manera, la transformación social se gesta en el seno de la “familia” campesina y en el flujo de la movilización social, es un deseo de reconstitución y restitución con horizontes contenciosos y refractarios. En el contexto de las movilizaciones contra la minería en Cajamarca –aunque generalizable para todo el país– se pueden notar dos horizontes yuxtapuestos, contrastados, en donde las significaciones son móviles pero que se superponen y contaminan en el habitar real –algo parecido a la idea *chi`xi* que propone Silvia Rivera (2010): 1) la utopía andina: como horizonte de deseo de organización comunitaria que gravita en el presente, se propone la derrota del colonialismo, y 2) el mesianismo andino: es un horizonte de deseo que espera el hombre providencial y salvador, puede centralizar la fuerza social.

En el horizonte comunitario en Cajamarca se ha prefigurado la autoafirmación colectiva como comunidades campesinas, se ha propuesto la construcción alternativa de un desarrollo propio a partir del fortalecimiento de redes comunitarias a través de ferias, turismo sustentable con el ambiente, fiestas, encuentros, asambleas, radios comunitarias, escuelas, casas ronderas y culturales, la sensibilización para la autoadscripción como pueblos originarios, etcétera; en éste sentido se fomenta la creación extensa de vínculos entre distintas unidades familiares, redes agroecológicas, conducidos principalmente por compromisos de colaboración y protección intercomunitaria. Este horizonte reafirma la auto-disposición organizativa basada en la



complementariedad del otro, donde la fuente es el comer, habitar, aprender, sanar e intercambiar, y para eso es fundamental la protección de pisos ecológicos mediante el trabajo rotativo y colaborativo.

Finalmente las movilizaciones en el horizonte comunitario configuran prácticas contra-coloniales, entendidas también como significaciones y afectos capaces de resistir a la dominación del cuerpo, es moverse del sitio que expropia, niega, saquea y mercantiliza, son experiencias y aprendizajes que reorganizan los vínculos sociales desde la misma colectividad e historia, es una producción práctica microscópica que quiere vivir su red comunitaria como materia fulgurante en un instante de peligro que significa el sistema capitalista.

Reflexiones finales

Un aprendizaje desde el breve caminar junto con las ronderas y ronderos, campesinos y campesinas en las montañas cercanas a la laguna Mamacocha en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, y en las reflexiones colectivas que han posibilitado este trabajo, es que existe la reorganización de la capacidad de intervenir en los asuntos de la vida, la capacidad colectiva de digerir diversos elementos culturales para crear propuestas y significantes con contenido autónomo, autogestivo y libertario, en la vida de las comunidades de las jalcas cajamarquinas.

Para el capitalismo neoliberal no es suficiente la instrumentalización de reformas para aumentar su acumulación y dominación, sino que viene aparejado por el uso monopólico y exacerbado de la violencia dirigida a toda la población, pero en específico a las resistencias y rebeldías frente al sistema dominante, el colonialismo contemporáneo como instrumento de dominación está fincado en un orden de verdad marcado como superior, que niega y deshumaniza a la diferencia subalternizada, requiere de aspectos visibles como la instalación de una identidad acorde al discurso dominante y de la extensión de dispositivos estatales que lo establezcan.

Las movilizaciones frente a la minería no han sido homogéneas, se han identificado dos horizontes yuxtapuestos, pero que se revuelven en el habitar real; el horizonte democrático representativo debido a su acotada y patricentrada participación ha reactualizado algunas formas de colonialismo interno, creando riegos de desgarramiento comunitario. Sin embargo, en las movilizaciones sociales la fluidez que disputa al orden dominante, también busca desmontar los diagramas de poder internalizados en la comunidad; las redes comunitarias que tejen la política del cuidado, la colaboración y complementariedad reafirma la reproducción de la vida como horizonte



de emancipación, y para eso es fundamental la protección de la madre tierra, de la que provienen todo el sustento comunitario.

Referencias bibliográficas

De Echave, C. José, Hoetmer Raphael y Palacios Mario (2009), *Minería y territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*, Lima, Programa Democracia y Transformación Global- Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería- CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo- Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales Unidad de Posgrado, UNMSM.

Echeverría, Bolívar (2010), *Definición de la cultura*, México, Fondo de Cultura Económica- Ítaca, 242 pp.

Echeverría, Bolívar (2012), *Valor de uso y utopía*, México, Siglo XXI editores.

Gutiérrez, Aguilar Raquel (2008), *Los ritmos del Pachakuti: movilización y levantamiento indígena-popular en Bolivia (2000-2005)*, Buenos Aires, Tinta Limón, 384 p.

Pinto, Vladimir (2009), “Reestructuración neoliberal del Estado peruano, industrias extractivas y derechos sobre el territorio”, en De Echave C. José, Hoetmer Raphael y Palacios Mario, *Minería y territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*, Lima, Programa Democracia y Transformación Global- Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería- CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo- Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales Unidad de Posgrado, UNMSM.

Rivera, Cusicanqui Silvia (2010), *Ch'ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*, Buenos Aires, Tinta Limón, 80 p.

Vilar, Sergio (1997), *La nueva racionalidad: comprender la complejidad con métodos transdisciplinarios*, Barcelona, Kairos.



Fórum popular das águas: Mobilização social de resistência no Ceará, Brasil.

Liana de Andrade Esmeraldo Pereira¹
Tiago Esmeraldo Pereira²
Pâmela Christina Silva Tavares³

Resumo

Este trabalho relaciona o projeto hídrico Cinturão das Águas do Ceará, Brasil (CAC), no trecho que intercepta a região do Cariri cearense, com o movimento de mobilização social em defesa do território ameaçado de expropriação. As demandas sociais comunitárias atualmente consideram a necessidade de fornecer informações que promovam a conscientização sobre as problemáticas locais e as relações por elas estabelecidas que afetam os direitos e o bem-estar da população atual e das gerações futuras. Pretende-se descrever o processo de mobilização social organizado pelas comunidades rurais do Crato, Ceará, Brasil, em prol dos seus direitos de participação nas decisões de políticas públicas que os afetam. Como essas comunidades responderam a ameaça de deslocamento provocada pelo CAC frente à violação dos seus direitos? O procedimento metodológico caracterizou-se por estudo de caso no qual foi utilizado o instrumento da entrevista semiestruturada com moradores participantes do movimento de resistência. A metodologia para análise dos dados fundamentou-se na análise de conteúdo. Os resultados indicam que o movimento social denominado Fórum Popular das Águas tem revertido em conquistas dos direitos destas comunidades, provocando alterações na estrutura do projeto original. Entende-se, portanto que as associações populares de resistência possuem um importante papel na construção de um espírito de cidadania efetivado através de ações coletivas de cooperação e solidariedade.

Palavras chave

Movimentos sociais; Direitos humanos; Cidadania: Participação social; Civismo.

Introdução

O nordeste brasileiro é uma região que vive assolada por secas frequentes e prolongadas. O clima semiárido com temperaturas elevadas e chuvas irregulares compromete a subsistência das populações rurais dessas localidades, as quais tem suas condições socioeconômicas comprometidas. Essa situação ocasionou, por muitos anos, o êxodo rural, quando não a morte de muitos sertanejos.



As estratégias governamentais de combate a seca, apesar de ineficientes na solução dos problemas climáticos, eram tentativas de minimizar os prejuízos socioeconômicos para as comunidades afetadas e reduzir o êxodo rural, evitando a transferência de problemas do campo para as cidades que já vivenciavam problemas como aumento populacional, desemprego e condições de pobreza e miséria.

Entretanto, a trajetória de vida do sertanejo é história de luta e resistência. Seja pela necessidade de sobreviver as condições climáticas adversas ou pela luta para ter visibilidade nas políticas públicas, as comunidades rurais se organizam e se mobilizam em prol dos seus interesses comuns.

Este trabalho discorre sobre um movimento de luta e resistência de comunidades rurais no interior do Ceará, Brasil, pelos seus direitos a terra, a água e ao seu patrimônio histórico-cultural, tendo por objetivo destacar o processo de mobilização social organizado por este grupo em prol da participação social nas políticas públicas destinadas a populações envolvidas com projetos hídricos.

Projeto cinturão das águas e seus desdobramentos

Ao longo do tempo, dos projetos governamentais de combate a seca, evoluiu-se para políticas de convivência com o semiárido que segundo Torres (2007) valoriza a integração entre território e recursos hídricos.

Desta forma, a água tanto é vista como prioridade para o governo, como forma de poder, fazendo parte do Plano de Desenvolvimento Sustentável para o Ceará (Chacon, 2007).

Podem-se mudar as estratégias, mas o objetivo da gestão da água obtém proeminência nas políticas do estado através do mudancismo e da perspectiva de desenvolvimento econômico.

Com esta finalidade e aliado ao projeto de transposição do rio São Francisco, surge o projeto Cinturão das Águas do Ceará (CAC). Projetado para captar a água do São Francisco e conduzi-la, gravitacionalmente, até as onze macro bacias hidrográficas do estado do Ceará, tem por objetivo abastecer cidades com déficit hídrico, chegando até a região metropolitana de Fortaleza (RMF) e garantir oferta hídrica para projetos de irrigação, turismo e desenvolvimento econômico como o Complexo Industrial do Pecém (EIA/RIMA, 2010).

Não obstante a necessidade de água para algumas cidades interioranas, o empreendimento tem trazido problemas as localidades nas quais a obra tem sido



implementada. Alguns desses problemas foram contemplados nos estudos e relatório de impacto ambiental. Entretanto, outras situações tem evidenciado os graves problemas que acompanham os projetos, idealizados em escritórios, mas bem diferentes aplicados na prática (Alves, 1953).

O discurso do crescimento econômico ignora as reais condições de desenvolvimento vividas pelas comunidades rurais, que possuem uma dinâmica relacional e estilo de vida diferenciado em relação ao urbano e que, nem por isso, é antiquado ou sinônimo de pobreza. Muitas vezes, observa-se mais pobreza no urbano do que no rural. Como ressalta Acosta (2009), o ambiente campesino é oprimido pela modernidade e, portanto, torna-se um conflito quando reivindicam o direito de manterem suas condições de ruralidade.

Destarte, o sertanejo vai descobrindo sua resiliência ante as circunstâncias demandantes e organiza-se em associações comunitárias para suportarem e superarem as dificuldades emergentes.

Comunidade e resistencia

As associações possuem um importante papel na organização e manutenção da comunidade, pois possibilitam maior capacidade de organização (Quintanar, 2009) e estabelecem ou reforçam atitudes de solidariedade, cooperação e espírito público (Putnam, 2008).

Bertini (2014) define que “uma comunidade seja urbana ou rural é um coletivo que se associa mediante alguns elos específicos como território, bairro, unidade política, . . .” (Bertini, 2014, pp. 83-84).

Quando as pessoas compartilham do mesmo espaço sociofísico e desenvolvem vínculos afetivos, expressos em padrões de conduta que revelam sentimentos de pertencimento e apego ao lugar, pode-se afirmar que se estabeleceu relações de apropriação com o lugar.

A apropriação pode ocorrer tanto por ação/transformação como por identificação simbólica. Na primeira situação explicitam-se comportamentos em defesa do território diante de ameaças e na segunda, reconhece-se o território ocupado como parte da própria identidade (Cavalcante & Elias, 2011).

Em ambientes rurais pode-se comprovar o forte entrelaçamento dos vínculos comunitários, sendo manifestos culturalmente por meio de hábitos semelhantes e



relações de cooperação e solidariedade entre a vizinhança, composta por familiares ou compadrios. Relações que manifestam a territorialização secundária, que envolve espaços comuns partilhados por pessoas que mantém relações de vizinhança e afinidade (Higuchi & Theodorivtz, 2018).

Portanto, foram estas relações estabelecidas com o lugar de moradia e com a vizinhança que suscitaram os comportamentos em defesa do território partilhado.

Metodologia

Para que o objetivo fosse atingido, procedeu-se a pesquisa bibliográfica para fundamentar os conceitos discutidos e a documental para compreender as nuances do projeto CAC.

A pesquisa de campo possibilitou entrar em contato com a comunidade, conhecer a sua história e trajetória diante do processo de desterritorialização.

Este estudo de caso foi desenvolvido no distrito Baixio das Palmeiras, situado na cidade do Crato, município na região sul do Ceará, Brasil. O distrito foi criado Pela Lei Municipal n.º 1.540, de 05-05-1994 (IBGE, 2019).

O distrito é composto por dez comunidades rurais, sendo o baixio das Palmeiras, sede do distrito (Nobre, 2017).

Utilizou-se a observação e a entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados. Foram realizadas visitas domiciliares e participou-se também de reuniões da associação e sindicato, de forma a compreender melhor a realidade da comunidade e suas questões cotidianas. Os dados coletados são referentes aos meses de abril a agosto de 2019.

Selecionou-se algumas entrevistas com moradores e lideranças comunitárias que versaram sobre o movimento de resistência da comunidade.

Os resultados serão apresentados em quadros representativos de categorias escolhidas posteriormente ao se analisar a transcrição das entrevistas, segundo a análise de conteúdo de Bardin (1977).

Este trabalho faz parte da construção de uma tese de doutorado.



Resultados e discussão

O Fórum Popular das Águas foi o nome dado ao movimento de luta e resistência do distrito Baixio das Palmeiras constituído em 2013 com o objetivo de discutir as questões pertinentes ao projeto CAC e os seus efeitos na comunidade.

Em face dos eventos ocorridos na fase inicial da implementação do projeto nas comunidades: invasão de propriedade, omissão de informação e inverdades, quando do primeiro contato com os moradores, ocorreu a mobilização das lideranças em prol da obtenção de informações sobre o projeto.

Inicialmente, as reuniões eram internas ao distrito com o objetivo de repassar para a comunidades as informações obtidas sobre o projeto Cinturão das Águas. Depois, ampliou-se para envolver outras comunidades que também estivessem enfrentando a mesma problemática da desterritorialização por projetos hídricos como outras comunidades em Barbalha e Crato.

Esta capacidade de organização e de colaboração da comunidade, como salienta Quintanar (2009), foi evidenciada pelo processo de mobilização alcançado, seja por protestos nas ruas do município, ou pelas audiências públicas solicitadas ou pelo envolvimento das universidades e sociedade civil.

O quadro abaixo apresenta relatos da trajetória do Fórum expressos pelo seu idealizador.



havia um movimento aqui mesmo de ser (+) contrário à obra (+) então todo mundo dizia não ao Cinturão, então nós fizemos uma (+) um ATO também na rua em Juazeiro, que na época foi foi a: (+) é:: a Rede de Advogados Populares também que puxou essa (+) GRANDES empreendimentos que estavam violando (+) o direito (+) de comunidades tradicionais.

em 2015 nós fizemos um evento aqui no, aqui no Baixio que (+) a Associação sempre fazia que é (+) que foi o: (+) é:: (+) Seminário /.../ Seminário das Associações Rurais,

foi uma construção coletiva, foi uma construção coletiva é:: (+) como um encaminhamento político desse Seminário que houve, a partir das oficinas, a partir do debate, a partir do (+) dos PARCEIROS

de resistência, de luta e essas articulações elas foram aumentando, nós conseguimos fazer várias representações na na Defensoria, na Promotoria, na própria Procuradoria lá em Juazeiro. E assim (+) a gente foi (+) FAZENDO essa disputa mesmo, essa disputa do que era a obra (+) dos males que ela poderia causar, 'de fazer um debate', fazer um debate sé-rio mesmo (+) de chamar as pessoas que seriam (+) afetadas pra tentar (+) entender o que essa obra, se realmente ela era necessária, a quem ela ia /.../ atender, se a gente ia ter direito a água (+) e principalmente também reduzir esses impactos que seriam provocados aqui. (+) E (+) a gente lutou muito pra ter acesso (+) é:: ÀS INFORMAÇÕES básicas, como o próprio EIA/RIMA da obra (+) como o projeto básico (+) e foi uma luta pra ter reuniões constantes aqui na comunidade.

Quadro 1 . Estruturação do Fórum

Fonte: elaborado pelos autores.

Um dos questionamentos levantados nas discussões da comunidade era sobre que desenvolvimento se intencionava trazer para aquele território, uma vez que a própria comunidade não o almejava, e se estabelecia como um grupo organizado com estilo de vida saudável e produtivo: “Quem tem que dizer que nós somos desenvolvidos ou não desenvolvidos?” (L, liderança comunitária).

Melo e Gonçalves (2014) questionam essa filosofia por trás do “Discurso de crescimento com projeto hídrico que destroça a relação do camponês com a terra” (Melo & Gonçalves, 2014, p.146).

A mobilização trouxe resultado favorável nas negociações com o governo, tal como a diminuição do número de casas atingidas. Algumas exigências foram feitas pela comunidade no sentido de evitar maiores transtornos como o não estabelecimento de acampamento dos trabalhadores da obra na comunidade. Entretanto, somente poder-se-á verificar o atendimento de tal solicitação quando a obra efetivamente começar no distrito.



A associação comunitária através de suas lideranças constituídas teve um papel importante no movimento de resistência, conforme podemos identificar em trechos das falas abaixo:

As negociações assim, foram todas através da Associação (+) a Associação ela [enga encabeçou] todas(R, liderança, moradora)
A gente foi fazendo (+) assim PRESSÃO, fazendo reunião, se mobilizando, eu sei que gerou muita confusão, muita: negociação e GRAÇAS a associação a gente tá: (+) ainda (+) RESISTINDO. (E, moradora com familiar desapropriado)
A formação do Fórum foi (+) pela questão em si da (+) do que TÁ ACONTECENDO.A luta da Comunidade! /.../ Assim (+) sem COMENTÁRIOS A MAIS, mais a luta da Comunidade, o poder de força da Comunidade em si (+) foi e tá sendo, até hoje tá sendo, é tanto que nois tamos ainda sem ter nada (+) mexido (N, liderança, morador)
é tanto que (+) a (+) a nossa Associação Rural daqui do Baixio das Palmeiras (+) a gente marcou uma (+) audiência (+) uma audiência, e e (+) TODA AUDIÊNCIA QUE TEVE (+) que têm muitas registrada (+) toda audiência que teve, foi a comunidade que procurou i marcar (V, morador com familiar desapropriado)

Quadro 2 . Atores de resistência
Fonte: elaborado pelos autores.

Considerações finais

As políticas públicas possuem um papel importante no gerenciamento dos recursos hídricos e como mecanismo proponente de estratégias de convivência com o semiárido.

Entretanto, algumas reflexões se fazem necessárias sobre a quem se destinam essas políticas, uma vez que para o atingimento de determinados objetivos, tidos como soluções, podem-se elencar diversos problemas socioambientais envolvidos.

A falta de informação e transparência na implementação dos projetos e a falta de participação dos atores envolvidos na tomada de decisão resultaram em conflitos, que mostraram-se tanto necessários como indispensáveis, uma vez que foram revertidos em instrumentos de luta e resistência de comunidades que seriam afetadas pelo projeto, em sua constituição histórica, social, cultural e patrimonial.

Camponeses com raízes indígenas, vivendo de agricultura seriam expropriados de seu modo de vida. Mas, a história de resistência da luta na terra se reverteu em luta pela terra, resultante em conquistas a serem celebradas, apesar das inevitáveis consequências dessas obras para o espaço de vida campesino dessas comunidades.

Ressalta-se, portanto, a necessidade de políticas públicas que considerem a realidade local dos supostos beneficiados e que haja investimentos em soluções locais que



preservem a história e o patrimônio cultural e afetivo das localidades afetadas por determinados projetos.

Evidencia-se a importância do papel das associações na mobilização das comunidades, proporcionando conscientização, informação e instrumentando-as na luta pelos direitos civis constituídos e fortalecendo a cidadania através de ações de cooperação e solidariedade.

Notas

¹ Doutoranda em Desenvolvimento Sustentável (Dinter CDS/UNB – UFCA), Professora da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Barbalha, CE, Brasil.

² Graduando em Direito pela Universidade Regional do Cariri (URCA), Crato-CE, Brasil.

³ Graduanda em Direito pela Universidade Regional do Cariri (URCA), Crato-CE, Brasil

Referências

- Acosta, E. A. (2009). Aportes del ámbito rural a la Psicología Social. Quintanar, C. S. *Psicología en ambiente rural* (pp. 35-41). México, DF: Plaza y Valdes.
- Alves, J. (1953). Secas dos séculos SVII e VXIII. In: Alves, J. *História das secas: século XVII a XIX* (pp. 3-72). Edições do Instituto do Ceará.
- Bardin, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
- Bertini, F. M. A. (2014). *Mudanças urbanas e afetos: estudo de uma cidade planejada*. (Doutorado em Psicologia Social). Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
- Cavalcante, S. & Elias, T. F. (2011). Apropriação. In: Cavalcante, S. & Elali, G. A. (org.). *Temas básicos em psicologia ambiental* (pp. 63-69). Petrópolis, RJ: Vozes.
- Chacon, S. S. (2007). *O sertanejo e o caminho das águas: políticas públicas, modernidade e sustentabilidade no semiárido*. Fortaleza, CE: Banco do Nordeste.
- EIA. (2010). *Estudo de Impacto Ambiental. Relatório de Impacto Ambiental – RIMA: estudo de viabilidade técnico - econômica, estudo ambiental e ante-projeto do trecho Jatí - Cariús do Cinturão de Águas do Ceará – CAC*. Secretaria de Recursos Hídricos (SRH).
- Higuchi, M. I. G. & Theodorovitz, M. I. G. (2018). Territorialidade. In: Cavalcante, S. & Elali, G. A. *Psicologia ambiental: conceitos para a leitura da relação pessoa-ambiente* (pp. 228-236). Petrópolis, RJ: Vozes.
- IBGE. (2019). IBGE Biblioteca Detalhes Crato. Recuperado de: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/crato/historico>



Melo, M. J. & Goncalves, C. U. (2014, dezembro). Impacto socioambiental da construção da hidrelétrica de Riacho Seco nas comunidades quilombolas do município de Santa Maria da Boa Vista – PE. Anais do Colóquio de Geografia Agrária Do Cariri Cearense, Crato, CE, Brasil, 2. Recuperado de: <https://bit.ly/38geUwn>.

Nobre, F. W. (2017). Os efeitos cinturão das águas do Ceará - CAC no Distrito de Baixo das Palmeiras, Crato–CE, 2017. 203 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável), Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2017.

Putnam, R. D. (2008). Comunidade e Democracia (5a ed.). Rio de Janeiro: FGV.

Quintanar, C. S. (2009). Psicología en ambiente rural. México, DF: Plaza y Valdes.

Torres, A. T. G. (2007). Hidroterritórios (novos territórios da água): os instrumentos de gestão dos recursos hídricos e seus impactos nos arranjos territoriais. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil.



Utopías en los movimientos sociales: Los casos de Magallanes/2011 y Aysén/2012.

Nicole Tamara Sepúlveda Cordero

Resumo

Han muerto los «grandes relatos»; sin embargo, los 20 años que nos separan de dichos acontecimientos han discutido fuertemente este 'fin de la historia». Y Chile no ha sido la excepción, pues poco a poco han ido surgiendo voces desde la ciudadanía proponiendo nuevos modelos de sociedad.

Desde esa perspectiva, surge el interés sobre Identificar las utopías presentes en el ideario de los dirigentes de los movimientos sociales de Magallanes/2011 y Aysén/2012, cuyas Asambleas Ciudadanas generaron reflexiones que iban más allá de la demanda, planteándose aspectos que permitirían elaborar la imagen de una sociedad ideal.

Palabra clave

Utopía; Movimientos Sociales; Ideario; Sueños; Ideales.

Introducción

Con la caída del Muro de Berlín y la Unión Soviética, nos encontramos frente a un mundo donde la vida social está definida por los márgenes que el Consenso de Washington ha impuesto: han muerto los grandes relatos, aquellos proyectos políticos por los que la sociedad estaba dispuesta a pelear, y no hay espacio para cuestionamientos frente a la sociedad que hemos construido post Guerra Fría, donde impera el libre mercado.

Sin embargo, los 30 años que nos separan de dichos acontecimientos han discutido fuertemente el fin de la historia, con el surgimiento de nuevos proyectos de sociedad que rebaten los pilares de este mundo globalizado.

Chile no ha sido la excepción, pues poco a poco han ido surgiendo alternativas a la forma tradicional de hacer política. La ciudadanía ha comenzado a construir espacios de discusión que van cimentando un contrapoder a lo instituido por el Estado; así se han articulado 'Asambleas Ciudadanas' en diversas localidades del país, casi todas abordando conflictos desde su situación local, para luego llevarlos a un plano más global.

Y aunque varias de estas Asambleas han interpelado al gobierno central a resolver los conflictos, desde una posición más demandante, también han levantado voces donde



plantean diversas formas de abordar sus problemáticas, asumiendo que tienen mucho que proponer y no sólo son bocas esperando comida, sino manos que trabajan por obtener soluciones.

Es, desde esa perspectiva, que la pregunta sobre las utopías toma especial relevancia cuando hay movimientos sociales que se han apropiado de las preguntas sobre la sociedad que queremos construir y han planteado formas y alternativas hoy... formas y alternativas que parecen ser novedosas, pero luego de estudiarlas parecen ser extemporáneas –parte de una época donde la Utopía era tema central—, invitándonos de esta manera a reflexionar sobre cuánto de las utopías pasadas se ha perdido en las últimas décadas y cuánto de ellas sigue vigente.

Fundamentación del problema

La utopía ha ocupado un sitio central en las definiciones de lo político, sobre todo vinculada al pensamiento progresista, pero particularmente en las ideas socialistas. Es así que desde finales del siglo XVIII fueron configurándose toda clase de construcciones literarias sobre la sociedad futura, naciendo un ideario social donde la utopía era absoluta protagonista: el socialismo utópico.

No obstante, ingresado el siglo XIX, el pensamiento socialista fue revolucionado por las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, quienes postularon un socialismo científico, fundado en el materialismo histórico como método, donde el protagonista debía ser la transformación social, apostando por la erradicación de la ilusión de la utopía (Engels, 1880; Marx & Engels, 1970).

Así el socialismo, utópico o no, se transformó en el nicho del pensamiento utópico del siglo XX, configurándose como una ideología –el marxismo— que asumió un rol central en las definiciones de la política mundial.

El interés y adhesión que concitó la utopía socialista, tras inspirar y guiar la revolución rusa, puso en cuestionamiento el modelo de sociedad imperante en el mundo, donde la hegemonía política era ejercida por un ideario capitalista, cuyo modelo era encarnado por Estados Unidos de América.

Este proceso conocido como Guerra Fría, que supuso una tensión permanente a nivel mundial entre estos dos polos, tuvo un gran impacto, también, en Latinoamérica, donde nació una Cuba comunista y un Chile socialista.



La revolución con sabor a vino tinto y empanadas suscitó gran interés a nivel mundial, sobre todo por las implicancias políticas que suponía un nuevo foco marxista en el continente americano; esto devino en una fuerte influencia y presión por parte de Estados Unidos en pro del derrocamiento del gobierno, lo que condujo a la Unidad Popular a un proceso de crisis general.

En ese escenario, el 11 de septiembre se produce el Golpe de Estado; “ante la crisis, la incapacidad del gobierno, la formación de grupos armados y el peligro de guerra civil” dice la Proclamación Solemne para justificar lo ocurrido ese día, en recuerdos de Alain Touraine (1973: 156).

Dicha crisis fue definida como una “de régimen y de sociedad más que de gobierno”, buscándose la imposición de una nueva normalidad y la construcción de un proyecto alternativo de sociedad (Valenzuela y Valenzuela, 1983; Lechner, 1988; Moulian, 1992). De este modo, la instauración de la dictadura militar supuso la disputa entre dos utopías y la derrota de una de ellas: la socialista.

Desde entonces, en esa izquierda derrotada, se impone un discurso orientado hacia la revaloración de la democracia, la institucionalidad y las alianzas, profundizado con el llamado a plebiscito de la Constitución del año 80', siendo este el punto de inflexión que terminó definitivamente por tensionar las concepciones utópicas predominantes las dos décadas anteriores (Moulian, 1983: 302-303; Garretón, 1983: 180-181, 186).

Se sufre una crisis de proyecto (Lechner, 1988: 41) y, desde allí, las líneas estratégicas de aquel ideario utópico marxista, encarnado por la Izquierda chilena, cambiaron radicalmente, imponiéndose la llamada Tercera vía, o Renovación Socialista.

En ese entendido, en los ochenta, se comienza un proceso de rompimiento con el marxismo como utopía guía en el pensamiento progresista nacional; lo que, además, se ve agudizado por la crisis que vivían los socialismos reales en el mundo, decantado en la caída del Muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética.

A partir de entonces, se funda una sociedad donde las alternativas parecen no existir (Fukuyama, 1988); donde aquellos que pregonaban el marxismo y la construcción de un ideal socialista orientaron su actuar hacia intentar gestionar y administrar el modelo legado por la dictadura, más que a transformarlo o visionar un mundo distinto (Dávila y Fuentes, 2003: 21, 27).



Sin embargo, en este escenario, diferentes actores han apelado a configurarse como agentes de cambio, en búsqueda de disputar ciertos espacios de decisión y poder. La sociedad civil se está posicionando como un actor que interpela directamente a la política: grupos sindicales, empresariales, de mujeres, de jóvenes, entre otros, llevan décadas planteando imágenes de la relación que debe existir entre esta y la sociedad (Faletto, 1991: 309), con el fin de volver a incidir en el quehacer político.

Así, nos hemos enfrentado a una población crecientemente agitada por diversas problemáticas que revisten un fuerte debate político, que ha estado cada vez más presentes en los últimos años. Estos movimientos, de una u otra forma, han conjugado dentro de sí intentos de reivindicar cierto ideario de sociedad, como la descentralización, el desarrollo sustentable, el pluralismo o la educación como bien social y público, que discuten aspectos centrales del sistema actual –orientado fundamentalmente a la idea de oferta y demanda como motor económico y social-.

Sobre esas condiciones se fue configurando lo que fue llamado como “La primavera de Chile”, el año 2011, con movimientos contra el alza del gas en Magallanes, el desfinanciamiento de la educación pública, la aprobación del megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén y la disminución de las cuotas de pesca, donde miles de personas salieron a protestar en diferentes lugares del país, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Algunos movimientos duraron días, otros meses, pero el elemento central fue la transversalidad social con que se desarrollaron; situados desde circunstancias y necesidades profundamente locales y, por tanto, más heterogéneos que los movimientos sociales tradicionales, tanto en términos étáreos, funcionales e ideológicos.

Entonces, se vuelve pertinente preguntarse qué explica la adhesión.

Según José Bengoa, existe una estrecha relación entre la identidad y la utopía, donde esta última expresa, como reclamo, la anhelada búsqueda de comunidad. Es decir, a través de la utopía, se constituye “nuestra identidad como sociedad” (2006: 15-20).

Entonces, ¿será que esta imbricación entre identidad y utopía sí explica la adhesión a un movimiento social?



Metodología

El enfoque metodológico de la presente investigación será de tipo cualitativo, pues la comprensión del papel que juega la utopía en el contexto actual de los movimientos sociales requiere de una necesaria interrogación a los sujetos, en el marco de sus vivencias y saberes dentro del esquema de lo social; por tanto, dada la centralidad que adquiere en la investigación la dilucidación de los discursos de los dirigentes, es la misma palabra de ellos la que es preciso comprender, las metodologías cualitativas constituyen la herramienta más pertinente.

Ahora bien, de acuerdo con el enfoque metodológico propuesto, la muestra responde a criterios de tipo teórico-estructurales, es decir, considera las posiciones de los sujetos en sus relaciones sociales para determinar la relevancia que supone su discurso para la investigación misma.

En ese sentido, es preciso señalar que, al estar dirigida la presente investigación hacia la dilucidación del ideario utópico que orientó la acción política en los movimientos sociales regionalistas de Magallanes/2011 y Aysén/2012, la unidad de análisis corresponde al espectro organizacional, social y político que fue partícipe y dio cuerpo a los movimientos sociales regionalistas enmarcados como Magallanes/2011 y Aysén/2012.

A su vez, cabe precisar que, dada la mixtura de actores y transversalidad social de dichos movimientos, la unidad de observación corresponde específicamente aquellas personas que hayan ejercido roles como dirigentes de los movimientos sociales regionalistas de Magallanes/2011 y Aysén/2012, entendiéndose como dirigentes a quienes actúen como directores, organizadores y/o portavoces del movimiento o de las organizaciones involucradas en él.

Así, en función de lo expuesto, fueron diecisiete los entrevistados, siendo ocho del movimiento de Magallanes/2011 y nueve del Aysén/2012. Ellos fueron propuestos y elegidos a decisión del equipo del proyecto en el que se enmarcó la presente investigación.

Dado que la presente investigación se realizó en el marco de un proyecto mayor, la pauta de entrevista abordó variados tópicos y el análisis del ideario de cada dirigente se realizó en atención a esa diversidad de elementos, no exclusivamente sobre la interrogante de los sueños y/o ideales que había tras su participación en su respectivo movimiento. Estos tópicos fueron:



- I. *Las razones, motivos o variables que según los propios sujetos explican su participación y el rol que asumieron en el movimiento*
- II. *El proceso y etapas que los llevaron a involucrarse en éste*
- III. *Los costos y beneficios personales y colectivos que tuvo el movimiento*
- IV. *Las etapas que atravesó el movimiento y sus hitos*
- V. *La valoración global que hacen del movimiento.*

Finalmente, el análisis de entrevistas se ha realizado a través de análisis de contenido basado en un modelo de desarrollo de categorías inductivas (Andreu, 2011: 23), las cuales fueron clasificadas en dos grandes temas: lo político y lo valórico.

Resultados y discusión

Al adentrarnos en las palabras de los dirigentes de los movimientos sociales en estudio e indagar en las razones que los guiaron a hacerse partícipes de estas instancias de movilización, fueron surgiendo demandas ya conocidas, enmarcadas en necesidades materiales. No obstante, dentro de sus discursos fueron tomando cada vez más relevancia nociones sobre “la sociedad que queremos”.

En ese ejercicio, se comprende cómo esto fue clave en darle solidez a su participación dentro del movimiento social, así como el movimiento social fue clave dentro de la construcción de este ideal. El movimiento social detrás de cada entrevistado fue permitiendo la elaboración de un ideario utópico que se alimentó de toda la particularidad que poseyó la movilización.

A partir de estas ideas comunes, se dispone el análisis en dos grandes dimensiones, que dan cuenta de los diferentes planos de abstracción con que se sitúan los entrevistados frente a la cuestión utópica: lo político, donde las ideas giran principalmente en torno a la organización de la vida en sociedad, considerando todos los aspectos que permiten la estructuración de la polis; y, lo valórico, donde la preocupación central son las bases fundamentales sobre las cuales se afirma la sociedad, desde un punto de vista normativo.

Respecto de lo político, se comprende esto a través de tres ámbitos fundamentales: cívico, gubernamental y económico.

La dimensión cívica se refiere particularmente a cómo se organiza y estructura la vida social en torno a la noción de ciudadanía, como sujeto colectivo. Las reflexiones de los entrevistados giran en torno a la importancia que le atribuyen a la articulación y el



establecimiento de tejido social, profundizando en las características que los espacios de participación debiesen tener y el rol a cumplir.

En cuanto a la dimensión gubernamental de lo político nos referimos a cómo los entrevistados conciben el vínculo entre la ciudadanía, el gobierno y el Estado, es decir, cómo se sitúan frente al plano de la institucionalidad política y cómo evalúan su relación.

Como último punto dentro de la dimensión de lo político, nos encontramos con las reflexiones que los entrevistados tienen en torno a lo económico, con un foco puesto profundamente en el desarrollo regional.

En la Tabla 1, pueden observarse en detalle las premisas principales que se obtuvieron en el análisis de los discursos de los entrevistados en el plano de lo político.

Por su parte, en el plano de lo valórico se vierten las reflexiones en torno a los aspectos normativos sobre los cuales se afirma la sociedad. En este punto, las preocupaciones de los entrevistados giran en dos ámbitos principales: reivindicaciones y horizontes.



		MAGALLANES	AYSÉN
LO POLÍTICO	CÍVICO	Importancia lucha social y unidad	Importancia lucha social y unidad
		No uso de la violencia	Violencia defensiva legítima
		Diversidad ideológica	Diversidad ideológica y generacional
		Valoración horizontalidad	Valoración orgánicas estructuradas y ejercicios asambleístas
		Abrir espacios de participación social	Territorio como espacio de organización
		Fiscalización ciudadana	Participación ciudadana con capacidad de decisión
		Vínculo con la política complejo	Lo político y lo social separados
	GUBERNAMENTAL	Agendas gobierno-céntricas; necesidad de comunicación directa	Agendas gobierno-céntricas y relegación de regiones
		Represión y anulación de protesta	Represión
		Conflicto de interés	Velar por la propia posición y existencia de conflictos de interés
		No hay representación regional en el congreso	No hay representación regional en el congreso
		Abandono del Estado para con las regiones	Abandono del Estado para con las regiones
		Políticas públicas centralistas no captan la realidad regional	Políticas públicas centralistas no captan la realidad regional
		No hay mirada geopolítica de desarrollo de zonas extremas, sólo preocupación por los límites	No hay preocupación geopolítica por las riquezas de las regiones, sólo por explotar los recursos
	ECONÓMICO	Extractivismo, sin preocupación por desarrollo económico	Extractivismo, sin preocupación por desarrollo económico
		Explotación de RR.NN. por extranjeros con la venia del Estado	Explotación de RR.NN. por extranjeros con la venia del Estado
		Necesidad de políticas económicas productivas, no extractivas	Necesidad de políticas económicas productivas, no extractivas
		Formar mano de obra especializada	Formar mano de obra especializada
Salarios más altos, acabar lógica de reducción de costos		Regionalización de los recursos	

Tabla 1

Como reivindicación se entenderá a aquello que los entrevistados consideran un elemento básico dentro de la sociedad y que no se encuentra consagrado, como libertades o derechos sociales.

Por otro lado, como horizontes se contemplan aquellas ideas que hablan de objetivos, respecto de cuáles son las directrices y principios normativos que dirigen un Estado o Nación.

En la Tabla 2, pueden observarse en detalle las premisas principales que se obtuvieron en el análisis de los discursos de los entrevistados en el plano de lo valórico.



		MAGALLANES	AYSÉN
LO VALÓRICO	REIVINDICACIONES	Partidos políticos y alianzas dan estabilidad y permiten cambios	Partidos son necesarios para conseguir objetivos comunes
		Unión de organizaciones sociales	Movimientos sociales
		Valoración de sindicatos, gremios, organizaciones vecinales	Valoración de sindicatos, gremios, organizaciones vecinales
		-	Conciencia de clase
		Nueva constitución	Nueva constitución y Asamblea Constituyente
			Nuevo modelo de sociedad
		Mejora de pensiones y sistema de salud	Desmercantilización de los derechos (Salud, Educación, Agua)
	Educación pública gratuita y de calidad		
	-	Acabar el oligopolio comunicacional	
	-	Lucha mapuche	
	HORIZONTES	Autogobierno	Autogobierno
		Autonomía regional	Autonomía regional / Potenciar municipios
		-	No al Estado subsidiario
		Autoridades subordinadas a la voluntad popular	-
Ocupación de cargos de poder por la gente común		Empoderamiento y disputa de cuotas en el Estado	
Revolución y tensionar el sistema en pos de transformaciones		Revolución y tensionar el sistema en pos de transformaciones	
Formar pensamiento crítico y reflexivo	Formar pensamiento crítico y reflexivo		

Tabla 2

Por otro lado, al observar estas categorías surgidas de los discursos de los dirigentes de los movimientos estudiados y situarlas en perspectiva con los elementos utópicos presentes en el ideario de la Unidad Popular en Chile, pareciera que muchos de estos están más vigentes de lo que el paso del tiempo hace suponer, lo que nos permite abrir el paso al contraste entre dos épocas y espacios diferentes.

En dicho escenario, se han concentrado los elementos a comparar dentro de cinco ejes temáticos: Democracia, Descentralización, Economía, Soberanía y Derechos.

En las Tabla 3 y Tabla 4, pueden observarse en detalle las premisas principales que se obtuvieron en el análisis de los discursos de los entrevistados en dicho ejercicio de contraste.



	UNIDAD POPULAR	MAGALLANES	AYSÉN
DEMOCRACIA	Garantización de libertades (conciencia, palabra, prensa, reunión)	-	-
	Garantización de derechos democráticos (sindicalización, organización, huelga)	Valoración de la organización y la lucha social	Valoración de la organización y la lucha social
	Pluripartidismo: democracia y representatividad	Partidos políticos y alianzas dan estabilidad y permiten cambios	Partidos son necesarios para conseguir objetivos comunes
		Diversidad ideológica	Diversidad ideológica y generacional
Revocación de mandato cuando un alto funcionario público resguarde intereses privados	Conflicto de interés	Velar por la propia posición y existencia de conflictos de interés	
DESCENTRALIZACIÓN	Asamblea del Pueblo como Cámara Única, decidiendo leyes, políticas y designación de jueces	Ocupación de cargos de poder por la gente común	Empoderamiento social y disputa de cuotas en el Estado
	Mecanismos de consulta, vinculantes y revocatorios	Abrir espacios de participación social y fiscalización ciudadana	Participación ciudadana con capacidad de decisión
	Organizaciones sociales intervienen en la toma de decisiones de sus áreas y la definición de políticas sociales y económicas	Autogobierno	Autogobierno
		Valoración de sindicatos, gremios, organizaciones vecinales	Valoración de sindicatos, gremios, organizaciones vecinales
		Unión de organizaciones sociales	Movimientos sociales
	Descentralización administrativa, mediante organismos regionales y locales con facultades económicas, políticas y sociales (dentro de un plan de desarrollo nacional)	Políticas públicas centralistas no captan la realidad regional	Políticas públicas centralistas no captan la realidad regional
		Autonomía regional	Autonomía regional / Potenciar municipios
No hay representación regional en el congreso		No hay representación genuina de la región en el congreso	

Tabla 3



	UNIDAD POPULAR	MAGALLANES	AYSÉN
ECONOMÍA	Eliminación de monopolios y del poder de capitales privados y extranjeros	Explotación de RR.NN. por capitales extranjeros	Explotación de RR.NN. por capitales extranjeros / Eliminación de la dependencia para conectividad
	Crecimiento económico rápido y descentralizado	Políticas económicas productivas, no extractivas	Políticas económicas productivas, no extractivas
	Nacionalización de recursos	Trato preferencial	Regionalización de recursos
	Plan de desarrollo económico nacional	Plan de desarrollo económico regional	Plan de desarrollo económico regional
	Salarios vitales y mínimos por zona del país	Sueldo mínimo regionalizado	Sueldo mínimo regionalizado
	Independización y desarrollo tecnológico	Formar mano de obra especializada	Formar mano de obra especializada
SOBERANÍA	Protección de la soberanía	No hay mirada geopolítica de desarrollo de zonas extremas, sólo preocupación por la soberanía	No hay preocupación geopolítica por las riquezas de las regiones, sólo por explotar los recursos
	No represión / Carácter nacional de FF.AA.	Represión y anulación de protesta	Policía actuando con violencia antes sus conciudadanos
DERECHOS	Nueva constitución	Nueva constitución	Nueva constitución mediante Asamblea Constituyente
	De derecho a educación y cultura	Educación pública gratuita y de calidad	Educación pública gratuita y de calidad
	Mejorar sistema de seguridad social y salud pública	Mejora de pensiones y sistema de salud	Desmercantilización de los derechos (salud, educación...)
	Promoción de la participación activa y crítica de los estudiantes	Formar pensamiento crítico y reflexivo	Formar pensamiento crítico y reflexivo
	Defensa comunidades indígenas (con tierra, asistencia técnica y crediticia)	-	Lucha mapuche

Tabla 4

Conclusiones

Como conclusiones es necesario mencionar que hay sueños e ideales en el ideario de los dirigentes de los movimientos regionalistas, que trascienden las reivindicaciones concretas o la demanda institucional. Y que este ideario utópico es bastante generalizado y homogéneo entre ambos movimientos, aunque con énfasis diferentes en algunos puntos menores.

Al contrastar el ideario de los dirigentes regionalistas con el ideario presente en el proyecto de gobierno de la Unidad Popular surgen importantes similitudes, desde la



preocupación sobre la participación ciudadana, hasta el ejercicio de soberanía y el desarrollo económico nacional.

Y, estas similitudes, a priori, no pueden ser explicadas por la existencia de un sustrato ideológico compartido entre ambos idearios, pues los dirigentes regionalistas tienen diferentes filiaciones o simpatías políticas. No obstante, la similitud sí podría explicarse por las transformaciones que sufrió la sociedad con la dictadura y los gobiernos posteriores, que consolidaron un Estado neoliberal, o por un tema generacional.

Referencias bibliográficas

- Andréu, J. (2000). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. *Fundación Centro de Estudios Andaluces, Universidad de Granada v.10, n.2*, 1-34.
- Bengoa, J. (2006). *La comunidad reclamada. Identidades, utopías y memorias en la sociedad chilena actual*. Santiago de Chile: Editorial Catalonia.
- Dávila, M., & Fuentes, C. (2003). *Promesas de cambio. Izquierda y Derecha en el Chile Contemporáneo*. Santiago: FLACSO - Editorial Universitaria.
- Engels, F. (1880). *Del socialismo utópico al socialismo científico*.
- Faletto, E. (1991). La renovación del Estado y la consolidación democrática en Chile. En *Enzo Faletto Obras Completas. Tomo I Chile*. (2008) Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Fukuyama, F. (1988). El fin de la historia. *The National Interest (Summer)*.
- Garretón, M. A. (1983). *El proceso político chileno*. Santiago de Chile: FLACSO.
- Lechner, N. (1988). *Los patios interiores de la democracia*. Santiago de Chile: FLACSO.
- Marx, K., & Engels, F. (1970). *Manifiesto Comunista*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Moulian, T. (1983). La crisis de la izquierda. En *Chile 1973-198?* México: Revista Mexicana de Sociología - FLACSO.
- Moulian, T. (1992). *El gobierno militar: modernización y revolución*. Santiago de Chile: Documento de trabajo, FLACSO.
- Touraine, A. (1973). *Vida y muerte del Chile Popular*. México: Siglo XXI Editores.
- Valenzuela, A., & Valenzuela, S. (1983). Partidos de oposición bajo el régimen autoritario chileno. En *Chile 1973-198?* México: Revista Mexicana de Sociología - FLACSO.



Movimentos sociais e ações coletivas – abordagens clássicas e contemporâneas.

Nelmires Ferreira da Silva

Resumo

A proposta desse artigo, ora intitulada “Movimentos Sociais e Ações Coletivas – abordagens clássicas e contemporâneas”, é parte das leituras desenvolvidas pelas autoras que ao longo das experiências empíricas, dos estudos, pesquisas e produções de conhecimentos, vêm consubstanciando o acúmulo teórico e amadurecimento crítico, de modo a fortalecer não só o posicionamento ideopolítico, mas também, visualizar as bases estratégicas de intervenção. Frente as diversas abordagens, conceitos, concepções e paradigmas que desafiam os estudiosos do tema, trataremos de vislumbrar a natureza dos sujeitos políticos e seus coletivas e das forças vivas em lutas, passando a desenvolver uma sistemática de investigação científica com o objetivo de focalizar: a) Os Movimentos Sociais na perspectiva Marxista/Clássica e b) Situar os Fundamentos das Análises Contemporâneas e Neomarxistas. Logo, para entender criticamente as tendências paradigmáticas acerca das abordagens e concepções da categoria movimentos sociais, adotamos uma metodologia baseada nos referenciais de Marx, Karl (1968); Gramsci, Antonio (1978); Warren, Scherer (1987); Touraine, Alain (1998) Melucci, Alberto (2001); Gohn, Maria da Glória (2004); Montañó, Carlos Eduardo e Dureguetto, Maria Lúcia (2011). Para isso, direcionamos a abordagem materialista, histórica e dialética, cuja trajetória teórico-metodológica somente pode ser entendida no movimento da totalidade da vida social (Netto, 2002).

Palavras chave

Tradicionais e Emergentes; Sujeitos Políticos; Tendências e Configurações; Movimentos Sociais; Ações Coletivas.

Introdução

A proposta desse artigo, ora intitulada “Movimentos Sociais e Ações Coletivas – abordagens clássicas e contemporâneas”, é parte das leituras desenvolvidas pelas autoras que ao longo das experiências empíricas, dos estudos, pesquisas e produções de conhecimentos, vêm consubstanciando o acúmulo teórico e amadurecimento crítico, de modo a fortalecer não só o posicionamento ideopolítico, mas também, visualizar as bases estratégicas de intervenção. Frente as diversas abordagens, conceitos,



concepções e paradigmas que desafiam os estudiosos do tema, trataremos de vislumbrar a natureza dos sujeitos políticos e seus coletivos e das forças vivas em lutas, passando a desenvolver uma sistemática de investigação científica com o objetivo de focalizar: a) Os Movimentos Sociais na perspectiva Marxista/Clássica e b) Situar os Fundamentos das Análises Contemporâneas e Neomarxistas. Logo, para entender criticamente as tendências paradigmáticas acerca das abordagens e concepções da categoria movimentos sociais, bem como, responder as questões que norteiam o debate poposto, adotamos uma metodologia baseada nos referenciais de Marx, Karl (1968); Gramsci, Antonio (1978); Warren, Scherer (1987); Touraine, Alain (1998) Melucci, Alberto (2001); Gohn, Maria da Glória (2004); Montañó, Carlos Eduardo e Dureguetto, Maria Lúcia (2011). Para isso, direcionamos a abordagem materialista, histórica e dialética, cuja trajetória teórico-metodológica somente pode ser entendida no movimento da totalidade da vida social (Netto, 2002).

No cenário de crises em suas diversas expressões, a latitudinal perpassa a dimensão do conhecimento cuja interferências paradigmáticas geram conflitivas entre os autores de abordagem clássicas e os autores pós-modernos, "notadamente, de versão neoconservadora" (Netto, 2002), niveladora dos paradigmas marxista e positivista. As questões que têm sido elaboradas voltam-se contra os diferentes "modelos" explicativos por suas macroabordagens e macronarrativas versus microabordagens e micronarrativas, as quais exaltam valores e sentimentos fundamentais dos homens com grande subjetivismo, imaginário, crenças, afeições, beleza, saberes do cotidiano, e entre outros, os elementos étnicos, religiosos, culturais e os fragmentos da vida. No campo do real concreto versus ideal abstrato, procuramos analisar: *há uma tensão que separa as abordagens paradigmáticas clássicos das contermprâneos, conformatando o panorama histórico passado e presente político-ideológico desses sujeitos?*

Dessa conformatação emergem a hipótese diretriz do objeto de análise, a qual situamos a abordagem sob base de fragmentos, do episódico, do micro, do transclassimo culturalista e identitário, etc, despolitizadores da dimensão à luz da totalidade da vida social, hiperfocalizando no fenômeno da representação. Nessa direção, os sujeitos e suas históricas linear e simples têm ganhando espaço no debate em detrimento da complexidade da sociedade capitalista em sua totalidade.

Essa tendência analítica traz consequências mediante o empobrecimento da razão pela sua intensiva subjugação à esfera da razão formal, ao estruturalismo e ao irracionalismo (Coutinho, 2010). Observe-se que estas mudanças de paradigmas interligam às



condições históricas e sociopolíticas que começavam a explicitar as contradições do modo de produção burguês, em que o homem, cada vez mais, se vê sujeito ao mundo das mercadorias. Nesse sentido, a referida ordem necessitava de mecanismos ideológicos e sistemas teórico-filosóficos capazes de sustentar sua ordem antagônica, é nesse contexto que o conservadorismo se articula como uma de suas expressões, minimizadoras das lutas cotidianas de modo a-histórico e identificadas com representações do real, com o predomínio da ideia sobre a realidade concreta.

Assim, os sujeitos em seus movimentos de luta têm sido forjados no impulso dos acontecimentos, movidos pelo senso de forte indignação, distante da reflexão mais complexa da questão social fundamentados no processo de produção reprodução capitalista. A retomada de novas reflexões trazem um caráter identitário de consciência em si, apresentando portanto, um perfil reivindicatório e fragmentado de contestações e insatisfações generalizadas, não tão aproximativas do que Maria da Glória Gonh observou ao afirmar que,

Gramsci considerava-se que a articulação de elementos dispersos e fragmentados no cotidiano dos indivíduos, expressos por representações e pela práxis, baseadas no senso comum, conteria o germe e a possibilidade de transformação social, pela politização e transformação da consciência das massas (Gonh, 1997, p.187).

È a luz da dimensão paradigmática, a qual entendemos como sendo de natureza pós-moderna que procuramos centralizar o debate neste artigo. Para entender criticamente essas tendências que reconfiguram o perfil dos sujeitos em suas lutas, bem como, responder as questões que norteiam as reflexões do objeto em estudo, cuja análises focalizam os novos sujeitos políticos e suas estratégias de lutas trazendo contribuições ao debate com rico teor qualitativo (Minayo, 2009).

A partir de então, a sistemática do texto encontra-se organizada em três partes (Introdução, Desenvolvimento e Considerações) visando situar as abordagens em suas claras interposições e aproximações teóricos-metodológicas. Nessa direção, imprimir dizer que esperamos que, o referido estudo possa despertar novas reflexões ao leitor e especialmente reforçar a análise crítica de estudantes e profissionais de serviço social que trazem um legado na história de compromisso e enfrentamento as contradições frente aos desafios que permeiam o espaços das lutas e dos sujeitos no movimento sócio-histórico contemporâneo.



Os Movimentos Sociais na perspectiva Marxista/Clássica

Na transição do Estado Liberal para o Estado Social democrático, século XIX, mediante à luta de classes (1849), os trabalhadores vivenciam a chamada consciência de classe, insurgindo na lutar por direitos, num movimento de catarse, *Classe em si*, para *Classe para si*, [...] opressores e oprimidos, estiveram em contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta [...]. Logo, operários construíram suas estratégias coletivas à luz da formação de uma consciência política enquanto classe social, passando a lutar por melhorias de vida e trabalho.

A “consciência para si” traduz-se numa percepção acerca da organização em classe social articulada pela ação política em direção à transformação do *status quo* ocorrida no século XIX. Na atualidade do século XX, as mundanças consideram que as estratégias teórico-metodológicas têm mecanismos de resistência, portanto, a direção que assume as lutas e os sujeitos no presente momento dão mostra de que a classe operária, mesmo que passando processo de fragmentação, mantém o cerne de capacidade política de reistir, portanto, reeditando seu papel, certamente, com maior complexidade (Hobsbawn,2000).

Para situar essa abordagem, é preciso referenciar Karl Marx, o qual ficou conhecido na história mundial por ser o mais importante ideólogo dos movimentos revolucionários no século XIX, cuja autoridade e prestígio intelectual na afirmação do modelo clássico de movimento social ganhou dimensão dentro e fora da academia. Vários autores (Scherer-Warren,1984, Alexander 1998, Gohn, 2000) destacam a grande contribuição do pensamento marxiano na construção de teorias explicativas dos movimentos sociais e assim como, influencia na orientação da prática dos movimentos sob a propositura da luta revolucionária.

Uma das grandes contribuições de Karl Marx foi estabelecer a relação entre a teorização e ação política dos movimentos sociais através do conceito de práxis social. Esta foi entendida como a transformação do social “que se realiza em conexão com a realidade teórica, por meio da atividade produtiva e/ou da atividade política” (Gohn, 2000, p. 176). E ainda, como resume Scherer Warren:

[...] pode-se afirmar que Marx, desde o ponto de vista da Sociologia, foi um dos mais importantes criadores de um projeto de transformação radical da estrutura social, projeto este de superação das condições de opressão de classe. Para a realização deste projeto, além do amadurecimento das condições estruturais propícias, exige-se também uma práxis revolucionária das classes exploradas (1984, p. 35) (grifos do autor).



Estudiosos e críticos do pensamento marxista visualizam que, ao trabalhar com o conceito de práxis, Karl Marx articulava a atividade prática (ação do movimento) e a teórica (concepção do movimento) numa dialética unidade-totalidade, na intenção da luta e transformação social. Daí, o marxismo dirigido ao estudo dos movimentos sociais é entendido não apenas como uma teoria explicativa, mas como uma teoria que fundamenta a própria ação destes movimentos, ou seja, teoria da práxis revolucionária. Muitos são os autores que têm comentado acerca da abordagem marxista engendrada pelos movimentos sociais, de modo a possibilitar uma caracterização genérica desta.

Logo, tal estudo referendado na abordagem marxista, centra-se na análise dos processos históricos globais, nas contradições materiais existentes e nas lutas entre as principais classes sociais implícitas no processo de produção e reprodução capitalista. As mudanças tendenciam a ser concebidas como fruto das contradições geradas pela oposição entre capital e trabalho, que contrapõem respectivamente a burguesia e o proletariado em uma luta ininterrupta: a luta de classes. Esta luta é concebida como o “motor da história”, cujo resultado ancora-se na suposição de que as contradições geradas por ela colaboram para a organização política do proletariado, permitindo criar as condições necessárias para a superação da ordem capitalista.

O dirigente “inevitável” do proletariado rumo à sua emancipação política e humana, conforme percepção marxiana, pelo partido operário, traça estratégias que concedem aos movimentos sociais, outro papel, para além das meras testemunhas do mal-estar social, incapazes, por si só, de iniciarem um processo de profundas mudanças nas estruturas sociais. Na perspectiva clássica, enfatiza-se o papel da violência e da coerção como táticas de luta, sendo as referências empíricas mais citadas, a Revolução Francesa (1789) e a Revolução Russa (1917). O uso da força é considerado como forma de garantir o controle das instituições aos revolucionários recém-chegados ao poder, defendendo-os de possíveis ofensivas contra-revolucionárias. Nessa direção, compreendem os movimentos sociais enquanto instrumental, ou seja, “como meios mais eficientes para alcançar a distribuição radical dos bens” (Alexander, 1998, p. 5).

Conforme Gohn (2000), a abordagem marxista acerca dos movimentos sociais, a priori não é percebida, vindo a torna-se movimentos pelas ações práticas dos homens na história. Para Scherer-Warren (1984, p.12-13), a abordagem marxista busca identificar nos movimentos “a necessidade de organização e da comunidade de interesse de classe; a exigência de uma vanguarda para o movimento; o desenvolvimento de uma



consciência de classe e de uma ideologia autônoma; uma proposta e um programa de transformação social". Estes constituem-se eixos principais a serem considerados para construção do movimento social.

Observa ainda, Gohn (2000), Marx contribuiu com duas grandes correntes de pensamento ortodoxa fruto dos trabalhos elaborados após 1850 e seus apontamentos acerca do desenvolvimento do capital, de fatores econômicos e macroestruturais da sociedade. Outros importantes expoentes identificados foram Lenin e Trotsky, referências da corrente marxista ortodoxa, predominante na primeira metade do último século a década de 1960 do século XX, com destaque sob a influência política dos revolucionários russos.

Os pressupostos gerais desta corrente baseavam-se nas determinações econômicas e macro-estruturais e, em razão desse fator, "geraram leituras mecanicistas e deterministas da realidade social, as quais predominaram na Segunda Internacional, nas primeiras décadas deste século [XX], e ainda, aquelas realizadas no período stalinista na Rússia" (Gohn, 2000, p.173). A segunda corrente está ligada ao "jovem Marx" e seus estudos sobre a consciência, a alienação, a ideologia, cuja tradição histórica-humanista e/ou heterodoxa referenciam-se nas obras de Rosa Luxemburgo, Gramsci, Lukács e Escola de Frankfurt.

Infere-se que mesmo que alguns destes autores tenham produzido ainda nas primeiras décadas do século XX, os trabalhos valorados no espaço acadêmico da década de 1960, momento em que se difundiram as críticas às concepções inspiradas no marxismo ortodoxo. A partir da revisão crítica dos trabalhos das correntes ortodoxa e humanista emergiram-se outras abordagens, agora sob a denominação de "neomarxistas", esta foi a otimizada dos estudos acerca dos movimentos sociais e da emergência do paradigma dos "Novos Movimentos Sociais".

Situar os Fundamentos das Análises Contemporâneas e Neomarxistas

Nosso ponto de partida está na compreensão crítica de que os novos sujeitos políticos se reiventam diante da multiplicidade de questões cuja essência está na raiz ontológica da sociabilidade do capital e trabalho em novo grau de complexidade, pois cada período histórico, na visão de Marx, possui sua própria dinâmica ancorada na lei da acumulação" (Marx, 1968, p. 15)

Podemos considerar que no quadro panorâmico atual, novos sujeitos emergem com forte tendência as outras bandeiras e agendas de lutas. Visibilizam-se outras



possibilidades na construção de sujeitos políticos que, por meio de uma consciência coletiva possam ultrapassar suas necessidades emergentes. Tal direção, caminha para um distanciamento da luta emancipatória, aquela cuja significado é a superação da propriedade privada, (...) “o fator real, imprescindível, da emancipação e reabilitação do homem” (Marx, 2001, p.142 e 148).

À luz das abordagens que afirmam que *não haveria validade nas formas de organização típicas dos trabalhadores e nem teria mais lugar para a construção da consciência e dos instrumentos políticos de luta destes: estaria, irremediavelmente, superada a possibilidade da classe para si*, refutamos estes embates teórico-políticos, ora em curso na academia e na produção editorial, nos órgãos da grande mídia, nos discursos e nas políticas governamentais, na difusão do pensamento da grande burguesia, dentre outros. Do ponto de vista das referências teórico-metodológicas da teoria social crítica marxista temos na base as raízes explicativas que encontram solidez quando captura a dinâmica da realidade contemporânea sob o prisma de determinantes e seu grau de complexidade para negar a positividade do real.

A partir da crise da abordagem marxista, com grand destaque para a corrente ortodoxa, emergiram concepções heterodoxas do marxismo, com variados graus de abandono dos pressupostos originários e interpretações que propõe novos referenciais a fim de compreender os novos fenômenos políticos e sociais. Estudiosos de larga envergadura permaneceram referenciando-se em elementos teóricos-chaves do marxismo, além de incorporarem novos elementos categoriais, ficando então, conhecidos de neomarxistas.

Seus estudos e teorizações sobre os movimentos sociais vão, paulatinamente, abrandando o peso das determinações estruturais e assumindo pressupostos teóricos que dão maior autonomia de ação aos atores sociais. Essa transição recebeu influências do emergente paradigma dos “Novos Movimentos Sociais”. O paradigma dos Novos Movimentos Sociais (NMS) surgiu a partir da crítica à abordagem ortodoxa marxista (no que é contemporâneo com as formulações neomarxistas iniciais) e aos “esquemas utilitaristas e às teorias baseadas na lógica racional e estratégica dos atores” (Gohn, 2000, p. 121). A preocupação centrava na análise da emergência dos movimentos sociais, principalmente na Europa, a partir de 1960. Entre as críticas dirigidas a abordagem marxista ortodoxa refere-se ao seu arcabouço teórico no que se refere a base das estruturas sociais materiais, considerada como fundante ontológica do ser social.



O paradigma dos NMS considera que esses elementos limitam a expressão da subjetividade dos indivíduos ao considerá-los como reflexo das determinações materiais. Além disso, subestimam-se as contribuições culturais e a ação criativa dos indivíduos na formação dos movimentos sociais. A ênfase analítica nas determinações das estruturas sociais servem para explicar por que os movimentos surgem, porém, revela-se incapaz de explicar a gênese e o processo de existência (Gohn, 2000).

A estudiosa Glória Gohn (2000) aponta características básicas que compõem o quadro analítico da teoria dos novos movimentos sociais, distinguindo do marxista ortodoxo, entre estas, elencamos: i) a eliminação da centralidade de um sujeito pré-determinado e específico criado pelas contradições do sistema capitalista. Já a abordagem marxista ortodoxa, a problemática das classes sociais é categoria central, utilizada tanto para refletir sobre as origens dos sujeitos coletivos e seus interesses, quanto para identificar o programa político-ideológico que fundamenta as ações; no paradigma dos NMS tendeciam ao transclassismos, sem ênfase as classes sociais. O novo sujeito apresenta-se como um coletivo difuso, não hierarquizado, que luta pelos progressos da modernidade e, ao mesmo tempo, é crítico à ela, fundamentando as suas ações em valores tradicionais, solidários e comunitários; ii) a política ganha centralidade nas análises, concomitantemente ao amplia o seu leque de abrangência, passando a ser considerada como uma dimensão da vida social capaz de abarcar todas as práticas sociais. Observa-se ênfase nas relações microsociais e culturais; iii) a construção de um modelo teórico baseado na cultura, que apesar de fazer uso das bases marxistas que vêem a cultura como ideologia, afasta-se da noção de ideologia, considerado-a falseamento da representação da realidade; e, iv) Quanto aos atores, estes são analisados pelos seguintes aspectos: por suas ações coletivas e pela identidade coletiva criada no processo.

Logo, imprimir aos atores sociais grande relevância na análise dos NMS, e por outro lado, os determinante das estruturas perdem centralidade. Assim, abre-se espaço para análise das ações dos atores e, dessa forma, a política ganha centralidade no desvendamento dos movimentos.

No bojo da globalização e das metamorfoses da sociedade salarial que se retomam as revisões da literatura cuja foco trazem contribuições para entender o aparecimento de novos sujeitos sociais. Novas formas de organização e articulação com destaque para os cenários políticos mais dinâmicos ganham espaço e visibilidade, e exatamente na introdução destes novos elementos que se gerou a emergência de revisões ou



atualizações sobre as teorias explicativas dos sujeitos históricos, políticos e suas formas de mobilizações sociais.

Ainda, nesse panorama, os novos sujeitos se estendem ao conjunto dos grupos sociais que formam parte da submissão real (os chamados “antigos movimentos sociais”) como os que integrariam o grupo dos subsumidos formalmente (“novos movimentos sociais”). O novo sujeito constrói-se sob a base popular e plural, por uma multiplicidade de atores e não pela “multidão” da qual falam Michael Hardt e Antonio Negri.

Na conjuntura atual do Brasil, a política vem se constituindo num espaço em que o homem contemporâneo usa para sair do isolamento existencial e político impostos pelo sistema dominante. A luz da agenda da participação cidadã nos diversos níveis de decisão da esfera pública e na construção de uma nova forma de convivência social, uma vez que o modelo representativo de participação fragmentada e indireta – tornou-se insuficiente e ineficiente para produzir o fortalecimento dos vínculos sociais, pois

é necessário que haja pessoas que possam pensar novos projetos, construir novas instituições, fazer novas experimentações sociais e, talvez, um dia, formar novo paradigma social e humano, que implicaria ter-se maior consideração pelos outros (Enriquez, 2006, p. 11).

O marco dessas mudanças verificamos o crescente recrudescimento dos movimentos sociais e das forças dos sujeitos políticos nas particularidades do Brasil cuja raízes estão fincadas no Movimento Constituinte de 1988. Os eminentes avanços das múltiplas expressões da questão social, no quadro de crise do capital, reeditam o debate sob o repensar acerca do papel dos sujeitos políticos, inclusive na prática inovadora e participativa.

Os mecanismos democráticos de participação social se fizeram necessários no contexto de acirramento dos antagonismos gerados pelas contras-reformas e ajustes neoliberais. A crise conjuntural e estrutural sinalizadora da competitividade, da globalização da violência, da corrupção fortalecem as forças dominantes, e a legítima mediante ideologia, mídia e a prática da competitividade, reforçando à barbárie.

Neste cenário à face que se desenha é a de uma lógica desenfreada que estimula o consumo, coisifica as relações humanas de forma naturalizante (Netto, 2008). É o panorama do globalitarismo, totalitarismo global, onde os Estados nacionais submetem ao projeto político hegemônico neoliberal a serviço da hegemonia do grande capital internacional (Santos, 2000).



Entre as aproximações paradigmáticas no universo das divergências teóricas consensuam-se que no atual estágio do capitalismo radicais alterações redesenham a tendência de um perfil de sujeito na contemporaneidade, cuja modificações ora se apresentam como reformistas, e ora, alternativa revolucionária dos trabalhadores enquanto classe que enfrenta os impactos do ordenamento do grande capital financeiro. Nesse panorama chocam-se visões conservadoras que apregoam a não possibilidade revolucionária, acompanhada de defesa das virtudes da ordem do capital.

De outro, pensadores nutrem a visão crítica, a exemplo de Gorz e Habermas compreendem que o capitalismo foi capaz de recriar estratégias à manutenção do seu funcionamento, propagando assim, a dominação da não capacidade de solucionar as expressões da questão social (Gorz, 1987). Nesse sentido, tendência uma compreensão de que o capital e o trabalho solidarizaram-se redesenhando o conflito não mais sob a produção material, portanto, não polarizando-se em classes,

tais conflitos já não se produzem nos âmbitos da reprodução material, já não canalizam através de partidos e associações, nem tampouco podem ser apaziguados recorrendo a compensações conforme o sistema. Os novos conflitos surgem antes de âmbitos da reprodução cultural, da integração social e da sociabilização; desenvolvem-se em formas de protestos subinstitucionais, em todo caso, extraparlamentar (Habermas, Apud, Waizbort, ano, p.78-79)

Estes discursos têm sido foco de grandes polêmicas no cenário do novo milênio, resultando numa pretensa edição teórica e retórica nas últimas décadas do século XX, com grande vigor especialmente, em 1980 e 1990 à luz da crítica pós-moderna (Ealgleton, 1998,2001; Tauraine,1994; Anderson, 1994). Esse quadro reitera-se no imaginário acadêmico, o qual tem cada vez mais sido pensado de forma particularizada na classe operária (Paoli, Sader e Telles, 1983).

E no bojo da globalização e das metamorfoses do mundo do trabalho que se retomam as revisões da literatura cuja foco trazem contribuições para entender o aparecimento de novos sujeitos sociais. Perquere-se ainda novas formas de organização e articulação com destaque para os mais complexos cenários políticos. É exatamente a introdução destes novos elementos que gerou a emergência de revisões ou atualizações sobre as teorias explicativas dos sujeitos históricos, políticos e suas formas de mobilizações sociais.

Vale sublinhar que o surgimento dos sujeitos políticos na história da humanidade em busca de liberdade e igualdade constituíram parte dos direitos conquistados, fruto das



lutas protagonizadas na história. Conforme estudos de Terribili (2012), a superação de contextos de opressão não se deve as concessões, mas das revoluções contra o dominador.

Em seus estudos, Aragão (2010) compreende que, quando nos referimos ao homem enquanto sujeito político, significa dizer que ele pode interferir na história mediante sua ação política. Portanto, configura como atividade lúcida, reflexiva e deliberativa, no dizer de Castoriadis (1992), objetivando a instituição de uma sociedade autônoma, com projetos coletivos.

À luz de estudos sob o recorte dos movimentos sociais, o processo de emancipação dos trabalhadores correu nos séculos XIX e XX, ampliando a concepção dos direitos que o liberalismo definia como civis ou políticos, introduzindo a ideia de direitos econômicos e sociais. “A ênfase recai sobre a ideia e a prática da participação, ora entendida como intervenção direta nas ações políticas, ou ainda, como interlocução social, ora orienta e controla a ação dos representantes (SPOSAT,2006).

Nesse espaço de mudanças, os paradigmas que abordam os movimentos sociais trazem novas reflexões teóricas cuja raízes encontram-se no decorrer da década de 1960, do século XX. Numa conjuntura extemporânea, as metanarrativas de intelectuais centram na crítica ao paradigma tradicional marxista. Na perspectiva desse renovado movimento de reeleitura e análise, autores como Alberto Melucci, Alain Touraine, Laclau, dentre outros, passaram a investigar os movimentos sociais, a luz de esquemas interpretativos que enfocavam a cultura, a ideologia, as lutas do cotidiano, a solidariedade entre os grupos e a constituição de identidades coletivas, dando sentido a um novo paradigma teórico de interpretação dos movimentos sociais.

No campo teórico tais questões emergiram à tona a partir do pós-1968. Um período de ascensão de novas formas de ações coletivas, mediante modelos de reivindicação classistas, os programas dos partidos políticos e projetos globais de sociedade. Nesse ínterim, entram em cena as práticas políticas de movimentos sociais como o feminista, ecológico, negro, novo sindicalismo, dentre outros, que ampliaram a forma de se fazer e entender a política, criticando os projetos de sociedade homogenizadores e reivindicando uma perspectiva de sociedade que buscava a diversidade. Ao lado dos movimentos tradicionais, surgem os novos movimentos – ecológicos, femininos, negros -, que ampliam enormemente as perspectivas de transformações sociais (Scherer-Warren, 1993, p.7).



No espoco das tendências paradigmáticas ganha centralidade o novo paradigma teórico dos movimentos sociais é a ênfase na dimensão política, a qual compreende que as práticas políticas estão nos variados espaços sociais e que as relações de poder estão muito além da relação entre Estado e sociedade civil. Nesse sentido, o poder, passa a ser entendido no âmbito das micros relações sociais, sem negar as relações de poder estabelecidas em macro estruturas, como os aparelhos estatais.

É importante lembrar que, durante os anos 1960 e 1970 os jovens, as mulheres, os idosos, os negros, entre outros sujeitos históricos, foram vistos como aqueles que estariam a margem dos processos de socialização. Tais sujeitos foram indicados como aqueles que estavam fora do processo de decisão no interior da vida política, não se esperava, portanto, que essas classes isoladas se constituíssem como grandes sujeitos políticos (Satafle, 2012).

Na atualidade, a política vem se constituindo num espaço em que o homem contemporâneo usa para sair do isolamento existencial e político impostos pelo sistema dominante. Através da participação dos cidadãos nos diversos níveis de decisão da esfera pública e na construção de uma nova forma de convivência social, uma vez que o modelo representativo de participação fragmentada e indireta – tornou-se insuficiente e ineficiente para produzir o fortalecimento dos vínculos sociais, pois

é necessário que haja pessoas que possam pensar novos projetos, construir novas instituições, fazer novas experimentações sociais e, talvez, um dia, formar novo paradigma social e humano, que implicaria ter-se maior consideração pelos outros (Enriquez, 2006, p. 11).

O marco desse movimento de retomada dos movimentos sociais e das forças dos sujeitos políticos nas particularidades do Brasil encontra-se raízes no movimento constituinte em que foi promulgada a Constituição Federal de 1988. Os eminentes avanços das múltiplas expressões da questão social, no quadro de crise do capital, reeditam o debate sob o repensar acerca do papel dos sujeitos políticos, inclusive na prática inovadora e participativa.

Os mecanismos democráticos de participação social se fizeram necessários no contexto de acirramento dos antagonismos gerados pelas contrarreformas e ajustes neoliberais. A crise conjuntural e estrutural sinalizadora da competitividade, da globalização da violência, da corrupção fortalecem as forças dominantes, e a legitima mediante ideologia, mídia e a prática da competitividade, reforçando à barbárie.



Neste cenário à face que se desenha é a de uma lógica desenfreada que estimula o consumo, coisifica as relações humanas de forma naturalizante (NETTO,2008). É o panorama do globalitarismo, totalitarismo global, onde os Estados nacionais submetem ao projeto político hegemônico neoliberal a serviço da hegemonia do grande capital internacional (Santos, 2000).

No Brasil, a partir de início de 1990, as implicações do contexto reeditam o reordenamento social sob o viés de reformas administrativas, trabalhistas, previdenciárias, etc, conforme os interesses do grande capital. Dentre outras (contra) reformas, podemos situar, na contramão de ajustes perversos, algumas conquistas, como à saúde pública, educação, seguridade social nos marcos do Estado de direitos, etc, sobretudo, o direito a seguridade, gestão e a participação social (Sposati,2006).

Daí, os movimentos sociais, os partidos e os sujeitos políticos emergiram diante da derrocada da ditadura civil-militar a eminente abertura do estado democrático de direito. O novo paradigma elimina o sujeito histórico, predeterminado pelas contradições do capital. Os participantes das ações coletivas agora são vistos como atores sociais com valores solidários e comunitários.

No entanto, as mudanças locais-globais no campo teórico-prático têm reconfigurado às lutas e os sujeitos. No trata a questão dos sujeitos políticos, Vladimir Satafle em debate afirma que um diagnóstico realizado por alguns analistas nos dias atuais, diz que nossa época e pós-política, compreendendo não haver mais engajamento político, exceto em questões de micro políticas, questões ligadas nos ajustes do modos de vida, mas não um engajamento em grandes projetos de transformações sociais profunda. Ou seja, viveríamos numa espécie de sociedade do desencanto, em que a sociedade não estaria mais interessada na política enquanto campo de transformações da nossa forma de vida, agora, capaz de realizar, pactuar uma espécie de consenso de que nossas sociedades é pós-ideológico (Satafle, 2012).

Com base na visão exposta acima, não haveria mais os grandes embates ideológicos que foram as marcas do século XX que dividiram o campo da política em dois grandes polos de confrontação: o pensamento liberal e o pensamento de esquerda, ambos com toda suas matizes. Nesse sentido, numa sociedade dita pós-ideológica, essas grandes posições políticas, suas metanarrativas a respeito da história, dos conflitos que desenrolam no campo da história teriam saído de cena, e sucessivamente, os grandes sujeitos políticos.



Os determinantes implicativos dessas mudanças teriam explicações no quadro da nova ordem mundial, o qual se constitui pela transformação das relações do poder em escala global. Nessa dinâmica a sociedade é absorvida ao enquadramento a esta lógica do poder, na concomitância da reconfiguração do poder no cotidiano real da vida social verifica-se a pluralidade que configura os novos sujeitos políticos e formas de luta contra o grande capital (Harvey, 2005).

Considerações

Em linhas gerais, verificamos a contraposição das abordagens clássicas com forte teor histórico e classista e de outro, os neoclássicos que propõe novas categorias de análises com vista a situar características reatualizadoras do novo perfil dos sujeitos políticos. Importa observar que ambas abordagens trazem à relevância nas interferências junto as grandes mudanças da sociedade mediante introdução de características e redesenho de suas estratégias de lutas.

A luz da abordagem clássica, os sujeitos continuam a ser chamados para a retomada das lutas sob a perspectiva de enfrentamento ao capital, cuja projeto societário sejam divergentes da atual ordem. Para isso, não podemos esvaziar a luta, muito menos perder o encantamento revolucionário à luta de classe. De outro, os chamados novos movimentos sociais, faz o chamamento para os sujeitos em suas singularidades e interesses que traduzem anseios em sua subjetividade, identidade e cultura parte do cotidiano migro dos indivíduos em sua micronarrativas.

Referências

- Alexander, Jeffrey C. (1998), "Ação coletiva, cultura e sociedade civil". Revista brasileira de ciências sociais. v. 13, n. 37, p. 05-30.
- Berman, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
- Castells, Manuel, (1999). Sociedade em rede. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.
- Chesnais, F. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996.
- Coutinho, C. N. O estruturalismo e a miséria da razão. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010.
- Gohn, Maria. G. (2000), Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola.
- Harvey, D. Condição pós-moderna. 6. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1996.
- Jameson, F. Pós-modernidade ou a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1996.



_____. Pós-modernidade e sociedade de consumo. *Novos Estudos CEBRAP*, São Paulo, n. 12, p. 16-26, jun. 1985.

Liotard, J. F. *A condição pós-moderna*. 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.

Marx, K. *O 18 de Brumário de Luis Bonaparte*. 2. ed. Lisboa: Avante, 1984.

Santos, B. de S. *Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade*. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1996.

Santos, J. S. *Neoconservadorismo pós-moderno e serviço social brasileiro*. São Paulo: Cortez, 2007a.

Simionatto, I. *As expressões ideoculturais da crise capitalista na atualidade e sua influência teórico-política*. In: CFESS. *Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais*, Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.

Tonet, I. *Democracia ou liberdade?* 2. ed. Maceió: Edufal, 2004.



La participación de las mujeres indígenas: Los obstáculos para la construcción de una democracia representativa.

Maireth Dueñas Chinchay

“Resulta innegable que tenemos una mentalidad gobernada por estereotipos occidentales con aspiraciones europeas. Y cómo no, si hemos sido educados [educadas y educades] toda la vida bajo esa visión, somos habitantes de Latinoamérica, un continente “descubierto y civilizado”, alimentado por una cultura traída desde afuera, completamente ajena a la realidad de quienes habitaban este pedazo de tierra”

Adriana Guzmán y Julieta Paredes

Resumen

La participación es un derecho ciudadano que no se ejerce con plenitud en los casos de pueblos originarios y más en las mujeres cuyo accionar es limitado espacios domésticos. Frente al inevitable avance social de las mujeres en procesos de toma decisiones, ellas son discriminadas por una doble condición opresora: ser mujeres y ser indígenas. Este trabajo tiene como objetivo describir cuáles son los obstáculos para lograr una democracia representativa a través de la participación de las mujeres indígenas.

La problemática radica en la efectiva implementación del enfoque de género en la participación promovida por el Estado, lo que desencadena que las mujeres no puedan tener la misma disponibilidad de tiempo para involucrarse en estos procesos decisorios. Finalmente, las principales limitaciones identificadas se refieren a la escasa convocatoria de participación a las reuniones, sobrecarga laboral doméstica, ausencia consenso en la programación de las reuniones que son en horarios imposibles de asistir para las mujeres y diálogos verticales liderados por los hombres. La persistente opresión de la participación de estas mujeres es un gran sesgo en la lucha por una sociedad democrática inclusiva e igualitaria para todas y todos.

Palabras clave

Participación indígena; Democracia representativa; Interseccionalidad; Enfoque de género.

Introducción

La participación de las mujeres indígenas es una apuesta en la lucha feminista, aquella que supera los ámbitos de la academia y se arraiga en las voces de las pluralidades de



las mujeres en territorios indígenas en los cuales quieren reclamar su posición en los espacios de toma de decisión.

A nivel de sociedad, las mujeres representamos la mitad de la población, a la cual se quiere mantener aún en el espacio doméstico o privado de la vida. Esta situación puede agravarse en la medida en que hayas más condiciones de vulnerabilidad/opresiones presentes en cada caso. Si nos situamos en un espacio originario, se podrá evidenciar contextos de interseccionalidad en los que las mujeres indígenas son discriminadas y silenciadas por su sexo y raza. Esta fusión del patriarcado y el colonialismo ha sido una fórmula opresora que ha contribuido a perpetuar las desigualdades y el yugo colonial, debido a que ha estado enquistada en el sistema sociopolítico de diferentes países latinoamericanos.

La participación es un mecanismo que ha sido empleado por hombres quienes tienen mayor presencia en la esfera pública/comunitaria y cuyos roles son de mayor prestigio. En cambio, en el caso de las mujeres, se ha construido una historia de lucha para lograr ocupar otros espacios en su comunidad que no sea su casa o los roles de cuidado que se les ha sido atribuido.

Perú ha ratificado el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo (1989), que se refuerza y concreta a nivel nacional mediante la Ley de Consulta Previa. En ese sentido, como Estado se compromete a superar las prácticas discriminatorias que afectan el ejercicio pleno de las ciudadanía de los pueblos originarios. Esta figura suele ser incumplida porque los procesos participativos en contextos indígenas son solo protocolares y más aún con las mujeres a quienes no se les toma en cuenta. Las mujeres asumen el rol de oprimidas de la opresión indígena, porque es un porcentaje mínimo el que acude a asambleas comunitarias y mucho menor el que es permitido opinar.

Es muy claro que la consulta previa se aplica desde una mirada occidental que invisibiliza construir diálogos desde las lecturas de las comunidades sobre lo que se entiende por participación, además de invisibilizar la importancia de incluir a las mujeres como protagonistas fundamentales en los diálogos participativos, debido a que todos los problemas que incumben a su comunidad van a demandar su intervención, la cual no puede estar sesgada ni desestimada por prácticas discriminatorias, patriarcales y coloniales.



Este trabajo se traduce en un esfuerzo por comprender la participación de las mujeres indígenas. Por un lado, reivindicar el concepto de participación, cuya esencia indígena ha sido desestimada por la resistencia (in)consciente occidental ante la construcción de nuevas epistemologías, aquellas del sur, de las voces de las mujeres indígenas. Por otro lado, se presentan los principales obstáculos en el acceso a la participación de las mujeres indígenas considerando los procesos de consulta previa en los que, a pesar del sustento normativo, los enfoques de género e interculturalidad no son incorporados e impera la lógica occidental y patriarcal, lo que impide la construcción de una sociedad igualitaria con base democrática.

La participación indígena de las mujeres ¿una utopía?

El concepto de Estado democrático suele resultar utópico, debido a que la democracia solo se manifiesta en la elaboración de un sinnúmero de instrumentos normativos, pero, rara vez, en su concretización, es decir en la aplicación de estos para construir una sociedad igualitaria, prueba de ello son las diversas brechas identificadas que impiden el desarrollo sostenible del país.

Esta situación se agudiza mucho más en las poblaciones indígenas que, históricamente, han sido excluidas y separadas por ser consideradas inferiores. Lamentablemente, este grupo social, que es ignorado por el Estado, es el que más vulnerable se encuentra en términos de acceso a servicios básicos, oportunidades laborales, etc. Partiendo del hecho de que este país presenta un porcentaje alto de comunidades indígenas, debería ser inevitable que ejerzan su derecho de participación ciudadana para que colaboren activamente en la formulación de estrategias de desarrollo comunal, de planes de trabajo, de políticas públicas y otras para que aporten el valor agregado tanpreciado que proviene de su cosmovisión cultural, de su forma de configurar su ciudad en base a sus creencias culturales, sobre todo, en decisiones que los involucran directamente. En el espectro de los pueblos indígenas, las mujeres se convierten en focos de doble opresión, por ser mujer y ser indígena, lo cual se va agravando por su condición de escolaridad, discapacidad física, etc.

El Convenio 169 se convierte en el instrumento de mayor eco internacional a favor de los pueblos originarios. Este Convenio contiene siete artículos que involucran a los territorios (tierra) y recursos naturales como elementos fundamentales para garantizar la continuidad de los pueblos indígenas a través de un desarrollo sustentable que contribuya a una mejora de la cohesión social y cultural.



En la actualidad, diversas instituciones estatales han invitado al diálogo y colaboración a las representantes de organizaciones de mujeres indígenas en los procesos de decisión y que estos se realicen de forma colectiva y más aún si estos las involucran ya sea desde el Ministerio de Salud, Trabajo, Educación o cualquier otro. Sin embargo, aún está presente la interrogante en torno al ejercicio de la participación de las mujeres indígenas como un derecho constitucional. Es decir, si bien es cierto los pueblos indígenas están más presentes en la agenda pública, es necesario determinar y evaluar en qué medida están siendo incluidas las mujeres en estos espacios participativos y cuáles son los principales obstáculos presentes en el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres indígenas.

En términos de Dussel (2005), es importante emprender la búsqueda de nuestra propia identidad histórica, libre de algún cariz colonial, y ello podrá lograrse si se restituye la autonomía de las mujeres indígenas a través de la participación. Esta licencia no se les será otorgada, sino que se tiene que reclamar y tomar desde los mismos espacios comunitarios. Muchas mujeres tienen que luchar por tener una oportunidad de participación efectiva en sus comunidades desde eventos propios locales hasta espacios de concertación en el marco de la consulta previa.

Sobre todo, las mujeres indígenas tienen que lidiar, en su proceso de autonomía y reivindicación, con prejuicios sociales que la subyugan a su rol reproductivo de y de cuidado, principalmente. Cadet (2017), sobre la situación de las mujeres indígenas mexicanas, señala que la participación es una ilusión de la misma forma que la igualdad entre sexos en un país donde aparentemente las mujeres son libres, pero que siguen bajo la opresión sin nombre. Esta situación es recurrente en países con alta herencia indígena donde la memoria de la colonización ha marcado su historia.

La participación indígena está logrando mayor posicionamiento, sin embargo, las mujeres indígenas siguen ocupando solamente las bases, realizando trabajos comunitarios, desarrollando procesos organizativos, etc., detrás de las cabezas dirigentes que suelen ser masculinas. De este modo, la participación indígena no puede entenderse como plena si solo favorece hay un grupo de la comunidad: los hombres. Al interior de la configuración comunitaria social y política, siguen vigentes los consensos verticales que excluyen a las mujeres y a las personas jóvenes o adolescentes, es así como se implanta la opresión patriarcal y adultocéntrica.



Repensando la participación

La piedra angular del Convenio 169 es la participación, pero qué se entiende por esta o en términos de qué estructuras se conceptualiza. Si se exige participación efectiva, debería identificarse cuáles son las condiciones que pueden asegurarla. Lo que se encuentra en el Convenio es una suerte de mecanismos de participación, pero ¿cómo han sido formulados?

El Convenio 169 tiene alcance internacional y sus lineamientos respecto a la consulta previa son genéricos y poco contextualizados a cada contexto indígena. Sin embargo, es responsabilidad de cada Estado formular políticas o leyes inscritas en ese Convenio con participación de las comunidades indígenas y con la integración de enfoques como los de interculturalidad, de género, de interseccionalidad, de derechos, etc. El objetivo de ello es abordar todas las pluralidades y complejidades de la población indígena nacional para establecer los mecanismos que entren en diálogo con sus realidades particulares y, asimismo, ofrecer los mismos medios de participación para todas, todos y todes en el marco del ejercicio de sus ciudadanías.

De acuerdo con Cladem (2015), la participación de las mujeres indígenas demanda “respeto para ellas y para sus pueblos, transformando las agendas, incorporando nuevos conceptos y cuestionando otros. Esto posibilitará la visibilización de la multiplicidad de voces”. En ese sentido, es fundamental interpelar la ontología de lo que se entiende por participación que ha sido concebida desde una mirada occidental apoyada en un sistema ajeno.

La participación va mucho más allá instituir etapas de socialización de la información, reuniones grupales y “consenso” sobre disposiciones elaboradas fuera de las lógicas que rigen las interacciones sociales y relaciones de poder de cada comunidad. Es decir, esto demanda un adentramiento en las subjetividades de las personas indígenas y en sus imaginarios colectivos que tienen una propia configuración de lo que es ser mujer, ser hombre, participar, comunicar, ocupar espacios de toma de decisión, etc.

En palabras de Zambrano y Uchuypoma (2015), es tangible que se “ha desarrollado una institucionalidad estatal que promueve la participación indígena de mujeres, sin necesariamente evidenciar la interseccionalidad que muestra las brechas de género y étnicas”. Esto ensombrece una realidad que debe ser visible, pues es producto de la negligencia del Estado que debe ser garante de derechos y de la indiferencia de la sociedad donde la discriminación está naturalizada y obstruyen el proceso de consolidación de las autonomías participativas de las mujeres indígenas. Su acceso a



los espacios de poder (ya sea a nivel comunitario, local, regional, etc.) es limitado o casi nulo, debido a sus múltiples condiciones de vulnerabilidad/opresión: ser mujeres, ser indígenas, ser pobres, etc.

La comunidad se entiende como una complejidad conjuntiva de diversos elementos. De acuerdo con el PNUD (2008), en la definición de participación, “se debe considerar el espacio territorial, la historia común, el idioma común, su organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso (p. 59)”. Se puede extraer dos elementos muy importantes a considerar como el territorio y la memoria en la construcción del concepto de participación para que pueda aproximarse a su comprensión desde los territorios y la lógica sentipensante.

Es importante enfatizar que, como señala Trelles (2010), la participación “es heterogénea y diversa depende del lugar y la experiencia de cada localidad y la normativa debería considerarla (p. 44)”. Esto no suele considerarse en las leyes ni en las políticas, las cuales pueden incorporar enfoques de interculturalidad o de género, pero insuficientes en su aplicación por diversas razones entre las que destacan la poca capacitación y apropiación de lo que significan estas perspectivas.

Según la ONAMIAP (2019), la participación indígena ha tenido un fuerte sesgo masculino que en la práctica no hace más que responder a las estructuras en las que se han construido las dinámicas políticas de las comunidades indígenas, las cuales son patriarcales y coloniales. Es decir, hay una conjunción entre estereotipos y roles de género que perpetúan la dicotomía mujer/ámbito doméstico y el racismo que niega ocupar cualquier espacio de toma de decisión a las personas indígenas por no corresponder a la figura eurocéntrica o a lo blanco privilegiado.

La participación debe entenderse como una forma de sentir y pensar desde los pueblos originarios y reconociendo la autonomía de las mujeres como entes de ensamblaje en la comunidad por su historicidad creadora, asimismo debe revertir las relaciones de género y poder en las que priman la masculinidad hegemónica y la colonialidad. Cada comunidad es un entretejido de las pluralidades que deben incluirse en los procesos participativos.

Principales obstáculos en la participación de las mujeres indígenas: Resultados y discusión

En el proceso de ocupar espacios de participación, las mujeres indígenas han tenido que luchar con dos grandes obstáculos: primero, convencer que la lucha de las mujeres



es la lucha de los pueblos, no hay una contradicción. Y, segundo, evidenciar que sus demandas merecen reconocimiento de la colectividad como viables, aunque estas cuestionen “prácticas culturales” que, muchas veces, vulneran y subordinan a las mujeres (Boaventura de Sousa, 2012). Esto último suele entenderse como una descalificación de la cultura, que conlleva a un determinismo cultural, en lugar de construir diálogos horizontales e interculturales sin imposición, sino; al contrario, considerando el derecho a decidir de todas las personas.

El rol reproductivo impuesto a las mujeres es, lamentablemente, un obstáculo para que las mujeres indígenas puedan ejercer su derecho pleno a la participación, puesto que se exalta la maternidad inmolada en la que se ven forzadas socialmente a priorizar sus labores de cuidado, las cuales las restringen al ámbito de lo doméstico o, en todo caso, pueden aspirar a labores asistenciales a sus parejas o cualquier figura masculina, sin que tengan acceso a un puesto de dirección o que demande liderazgo.

Además, la posición de desventaja identificada de las mujeres indígenas impide su participación. Por ello, se deben establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente y con capacidad propositiva, porque las mujeres suelen ser incluidas en los procesos participativos protocolarmente y en estos sus opiniones, en caso de que las expresen, no suelen ser consideradas. Esta situación específica exige una mirada interseccional que involucre múltiples condiciones de vulneración de derechos que amplían las brechas de acceso a la igualdad, al menos en estos espacios de toma de decisión mediante la participación.

A pesar de la existencia de normativa internacional y nacional que promueven la participación de las mujeres indígenas, estas disposiciones son solo declarativas, porque no hay una suficiente voluntad ni política ni social para formular colectivamente mecanismos efectivos que garanticen la participación horizontal y comunitaria de las mujeres indígenas. Esto demandaría revertir imaginarios sociales que apunten a reformular el concepto de participación con adecuación intercultural y de género, además de una mayor inversión presupuestal para ejecutar todo ese proceso. De este modo, la aplicación de convenio requiere de una evaluación participativa en su legislación y en su práctica para que pueda monitorearse que sea efectivo y se genere, verdaderamente, la participación indígena que contribuya a fortalecer el tejido social que está tan resquebrajado por la ausencia de una identidad cultural que ha sido arrebatada por la herencia colonial que está presente, a veces no tan latente, en nuestra historia como país, como Latinoamérica.



De acuerdo con la Ley de consulta previa, este proceso se desarrolla empleando una metodología con enfoque intercultural, de género y flexible a las circunstancias. Sin embargo, en la práctica, aún presenta debilidades, porque muchas de las asambleas suelen hacerse en horarios que son muy complicados para las mujeres y cuya inasistencia es frecuente.

En todos los escenarios, las mujeres asumen mayor carga doméstica y no es considerado para programar las reuniones de consulta. Asimismo, la mayoría de estas mujeres suelen ser monolingües y hablan solo la lengua originaria, lo que dificulta la comunicación fluida porque el equipo de traducción e interpretación es limitado y no son especialistas en todas las lenguas originarias. Esto deja sin atención a un porcentaje de la población indígena.

Por otro lado, la documentación compartida suele caracterizarse por un excesivo tecnicismo, es decir en procesos de consulta previa el Estado comparte propuestas con múltiples normativas cuyo discurso no es amigable y no contribuye a que haya una comunicación efectiva y clara en el proceso de socialización e información. Además, son documentos densos que casi nunca son revisados en totalidad ni por las mujeres ni por todos los hombres. En este escenario se identifica también que se requiere fortalecer el enfoque de interculturalidad y adecuarse a sus formas de producción de conocimientos, de saberes.

Reflexiones finales

1. Tanto la normativa internacional como la nacional en la se apoyan los derechos de los pueblos indígenas presentan disposiciones declarativas que promueven la autonomía de las poblaciones indígenas en espacios de toma decisión, sin embargo, en la práctica estas no son efectivas.
2. El concepto de participación está inscrito en una lógica occidental y es inviable que tenga efecto en un contexto comunitario donde debe reconfigurarse en función a las lecturas de estos pueblos. Al participar, se recibe, se comparte, se comunica y se interpela rompiendo las barreras coloniales.
3. Se evidencia una desestimación del concepto de *participación* desde las mujeres indígenas. La negación occidental por la construcción de nuevas epistemologías, por nuevas formas de construcción de saberes, que sean más sentipensantes y plurales.



4. Este proceso de reconceptualización demanda propuestas desde los saberes de las mujeres indígenas, sus memorias individuales y colectivas que dan sentido al tejido del buen vivir y recuperan pensar y actuar en comunidad revirtiendo relaciones de poder patriarcales y coloniales.
5. Los roles y estereotipos atribuidos a las mujeres impiden que ejercen su derecho a la participación ocupando espacios de poder, dirigencia o liderazgo en su comunidad, porque socialmente se reprueba el desarrollo de las mujeres quienes deben priorizar su rol de madre, de esposa, de hija, de hermana, de tía, etc., cualquiera que demande el cuidado por otros, otras y otros.
6. El ejercicio de la participación de las mujeres indígenas es obstaculizado por la deficiente aplicación de metodologías interculturales y con enfoque de género contextualizadas a los territorios y a las pluralidades de las poblaciones indígenas con énfasis en las mujeres.
7. A nivel de comunidad, y en general, la participación de las mujeres indígenas se ve debilitada por la marcada historicidad patriarcal y colonial de nuestra realidad como sociedad, que exige una subversión de imaginarios desde los saberes y sentires de las cosmovisiones indígenas.

Referencias bibliográficas

Boaventura de Sousa Santos y A. Grijalva (Eds). (2012). *Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador*. Ed. Abya Yala, Fundación Rosa Luxemburg, Quito.

Cadet, Jean. (2017). La mujer indígena y su derecho a la participación política en México. *Revista Prolegómenos – Derechos y Valores*, 145-158.

Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer Cladem (2015). La participación de las mujeres indígenas en la conservación del patrimonio cultural, Perú.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (1989). Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. *Cuadernos de Legislación Indígena*. México, D.F.: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Dussel, Enrique. (2005). Transmodernidad e interculturalidad: Interpretación desde la Filosofía de la Liberación [Versión electrónica], *Interculturalidad y Derecho de los Pueblos Indígenas*, 13-28.



Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIAP – OXFAM (2019). Sin mujeres indígenas, ¡No! Aproximaciones desde la implementación de la consulta previa, libre e informada en la industria extractiva en el Perú, Lima.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2008). Los espacios conquistados: participación política y liderazgo de las mujeres indígenas de México, México DF.

Trelles, Mariela. (2010). *Participación ciudadana de las mujeres de organizaciones sociales en las localidades de Ate, El Agustino y Santa Anita*. Tesis elaborada para optar el grado de Magíster en Gerencia Social (Pontificia Universidad Católica del Perú), Lima.

Zambrano, Gustavo y D. Uchuypoma. (2015). *Intersectando desigualdades: participación política de mujeres indígenas a nivel subnacional en el Perú*. Lima.



Develando movimientos pacifistas de mujeres: La ruta pacífica de las mujeres en Colombia.

Gloria Inés Montoya Duque

Resumen

El propósito es presentar un balance del movimiento de mujeres por la paz en América Latina y analizar el alcance político de la Ruta pacífica de las mujeres en Colombia.

Se señalan los movimientos pacifistas de mujeres en cada contexto en Latino América, para luego detenerse en el caso colombiano. Se toman los principales contenidos reivindicativos, las formas de acción, los repertorios y otros componentes e interpretar el rol político. Especialmente en los acuerdos de paz, su incidencia en acciones orientadas al reconocimiento y reparación de las víctimas dada la perspectiva de género lograda tras más de 20 años de lucha por la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la paz con una salida negociada del conflicto armado y el reconcomiendo del ejercicio de la violencia contra las mujeres.

Se discute desde los conceptos género, conflicto, movimiento social, acción colectiva, feminismo y pacifismo. La metodología es de carácter descriptivo interpretativo tomando fuentes documentales de prensa, páginas web, entrevistas y bases de datos de archivos oficiales.

La Ruta pacífica de las mujeres logra representación política como sociedad civil. La organización y continuidad crean nuevas acciones por la no violencia hacia la mujer y la paz sostenible. La organización y continuidad lleva a la participación activa y al control en la implementación de los acuerdos de la paz.

Palabras clave

Movimiento social; Acción colectiva; Conflicto; Género; Pacifismo; Feminismo.

Introducción

En las dos últimas décadas hemos sido testigos de muchos cambios en este mundo globalizado y se han presentado diversos conflictos entre naciones o conflictos internos. Nos interesa destacar que así mismo hay diversos movimientos sociales que hacen parte de dichos cambios. Nos interesa destacar de manera particular los movimientos de son pacifistas y feministas en medio de conflictos armados o guerras, es decir movimientos de mujeres que asumen la reivindicación de género y una acción política por la paz y su permanencia.



Para luego hablar de manera concreta de la Ruta Pacífica de las mujeres en Colombia como movimiento de carácter feministas y pacifista, surge cuando el conflicto armado en Colombia había ganado en intensidad, surge junto a otras iniciativas por la paz de la sociedad civil. Ha logrado tener continuidad y trabajar en el propósito buscar una salida negociada al conflicto y denunciar la violencia contra mujer en todas sus formas y trabajar por la equidad de género. Por ello, se pretende analizar el movimiento y el rol político que ha tenido desde su conformación en 1996 hasta los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc en el 2016.

Sobre los movimientos de mujeres por la paz

Tal vez uno de los aportes más importantes sobre los movimientos de mujeres pacifistas es el texto “Las Mujeres en Pie de Paz” de Magallón (2006), quien introduce un campo de investigación que integra la reivindicación de las mujeres, con sentido feminista en contextos de guerra, es visto como un fenómeno presente en diversos conflictos, en las guerras nacionalistas europeas, el medio oriente, África y los conflictos internos en Latinoamérica. La mujer en su lucha por la igualdad de género y más que en la condición de víctima o victimaria, es promotora de la mediación y la búsqueda de la paz.

La autora señala: “la implicación femenina en la construcción de paz se expresa en el trabajo de base que llevan a cabo tenaz y creativamente los grupos de mujeres extendidos por todo el mundo, grupos en los que crecen prácticas alternativas y contrapuesta al belicismo” (Magallón, 2006: 4) y posteriormente señala para que se organizan las mujeres unidas que a su vez excluidas la política tradicional, para luego señalar que la paz es una opción libre y renovadora entre la exclusión y la extrañeza (Magallón, 2006:6). Presenta dichos procesos en Irlanda del Norte, Palestina – Israel, Sudáfrica, Momowlan, para luego señalar el caso de Nicaragua, Guatemala, Colombia. Otro aspecto importante son las organizaciones como UNIFEM de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Cumbre de la Haya, entre otras que reconocen las acciones de las mujeres en los procesos de paz, estas organizaciones internacionales proponen el aumento de su participación en los mismos, como también la preparación dichos procesos con perspectiva de género, la protección de las mujeres en conflictos armados y el post conflicto, como también la puesta en práctica de programas incluyentes y con perspectiva de género en contextos de guerra. (Magallón, 2006:17). Además de su importancia en términos de alcance político en la mediación de los conflictos y alcance en términos de las transformaciones de las colectividades.



Otro aporte importante se encuentra en “Género y Paz” editado por María Elena Díez J. y Margarita Sánchez R., presenta las discusiones de género orientadas a la creación de propuestas para la cultura de paz, destacan las experiencias de las mujeres y la paz, partiendo en primer lugar de la dimensión histórica, el reconocimiento de la complejidad y pluralidad en las relaciones de género y a su vez, señala que los inicios del movimiento feminista y pacifista se dan con el surgimiento de la modernidad y señalan el recorrido histórico de las luchas de mujeres feministas y pacifistas. Los autores señalan que la paz que se promueve es concebida con compromiso, capacidad de acción, creadora, promotora de cohesión, progreso, desarrollo social y personal para una sociedad sin discriminación, violencia, desigualdad y opresión (Díez y Sánchez, 2010:9).

Se parte de las diferenciaciones de los tipos de violencia, la relación de violencia estructural y la violencia de género, pasando por la diferenciación de géneros, la construcción de masculinidades y feminidades construidas por el sistema patriarcal que domina y crea relaciones de poder (Díez y Sánchez, 2010:20,22). Recoge el aporte de Betty Reardon en distinguir diversos tipos de patriarcalismo: tradicional, transicional y transformacional, desde una visión histórica (Díez y Sánchez, 2010:27). También se muestra los inicios del movimiento de mujeres por la paz y que desde un comienzo significó para la mujer más derechos y la no violencia que es igual a paz (Díez y Sánchez, 2010: 89), sobre la paz que reclama las mujeres afirma:

“las mujeres excluidas del poder y la riqueza, del orden socio simbólico que representa la modernidad, la creación, el espacio fuera de vida, el concepto del progreso descorporeizado, la cultura como documento de barbarie, han desarrollado prácticas subalternas que han hilvanado otros modos de hacer y de crear, de sobrevivir, al igual que muchos pueblos excluidos (Díez y Sánchez, 2010: 155).

También está el aporte significativo de Cynthia Cockburn con su trabajo “Gender, armed conflict and political violence, en: the world bank, Washington (1991)”, presenta un análisis diferenciado por género ante el militarismo y armamentismo, analiza el trabajo de las mujeres cuando hay un conflicto armado y también los efectos como desarraigo, desplazamiento, efectos psicológicos, los efectos del conflicto y el postconflicto en que la mujer asume los riesgos en el proceso. Señala diversas experiencias de las mujeres trabajando y reivindicando la paz, experiencias como las Mujeres de Negro, las Mujeres por la Paz (Palestina), la Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia, entre otras. En las experiencias seleccionadas tienen en común la posición de oposición ante la violencia,



la expresión de la dominación, el sometimiento, la subordinación y los abusos sexuales en los casos de la guerra y militarización (Cockburn, 1991: 4-10)

La autora manifiesta que en las relaciones de género y clase se reproducen las relaciones que mantienen el statu quo en las sociedades, también las mujeres reproducen las formas patriarcales, a su vez asumen nuevas labores y roles al retomar la familia y entorno inmediato en un contexto de conflicto armado. La mujer se enfrenta la vivencia del conflicto y postconflicto entre las diferencias de etnia, ideología y clase. Además la mujer se halla en un continuo de violencia, antes, durante y después del conflicto junto con la violencia sexual y doméstica (Cockburn, 1991: 11- 17).

El alcance político de las mujeres se expresa en las acciones comunitarias, los refugios, el apoyo a las mujeres después de un proceso de paz, el trabajo para construir la paz y enfrentar los efectos que deja la guerra. Es decir, después del conflicto también está el proceso ayuda, justicia y reconciliación, en tales momentos puede haber políticas represivas, que requieren ser evitadas, posteriormente en la reconciliación es importante la salud social, llegar a la verdad de los crímenes, especialmente por violación de los derechos humanos contra las mujeres, víctimas de la violencia sexual y otros crímenes, en tal sentido, el activismo y representación política de las mujeres se han orientado en que las políticas de post conflicto posean la dimensión de género (Cockburn, 1991: 18- 21).

Posteriormente, de la misma autora “Mujeres ante la guerra: de donde estamos” (Cockburn, 2007), presenta un aporte conceptual y empírico en los estudios sobre feminismo y pacifismo. En primer lugar, parte en señalar la necesidad de entender la estructura de las formas de la guerra al considerar la dimensión de género y de la pregunta ¿qué tipo de feminismo genera activismo ante la guerra? pues se circunscriben en “sistemas de poder implicados en la guerra” y manifiestas en las relaciones de clase, género y etnia (Cockburn, 2007: 281).

La autora considera apropiado la perspectiva del feminismo marxista que considera las relaciones de clase y explotación económica, junto a un enfoque holístico multidimensional del poder y la violencia para comprender el crecimiento del militarismo y la guerra en los distintos contextos sociales Otro concepto de la tradición marxista es el de alienación y se integra a la expresión del poder desde las tres dimensiones ya mencionadas: género, etnia y clase. En este sentido, señala que la cualidad del poder es más fuerte en la relación sexo/género más que en cualquier otra estructura de poder (Cockburn, 2007: 324). En la expresión de la violencia es evidente que para el hombre



el acto sexual es una agresión, manifiesta su dominación y es también una liberación del miedo (Cockburn, 2007: 334, 343). La autora destaca la noción de género entendido como una relación de poder, producido y reproducido en un proceso social, es decir, es una construcción social en contextos diferentes en que hombres y mujeres reproducen relaciones patriarcales y de jerarquías.

En el militarismo, el poder se impone con el uso de la fuerza violenta, en este sentido recoge el aporte de Tilly refiriéndose a la noción de coerción y cita: “la coerción define la esfera de la dominación, como el capital define la esfera de la explotación” (COCKBURN, 2007: 317). Para la autora la coerción y la visión multidimensional del poder son necesarios para explicar la guerra y el militarismo surgidos de los distintos conflictos en la sociedad.

El texto es producto de la investigación de los movimientos de mujeres en conflictos armados con contextos diferentes, es decir, como la autora expresa, ante distintas guerras se presentan diversas respuestas. Describe los movimientos antibélicos de las mujeres, como son: en el caso del genocidio de mujeres de Gujarat, las mujeres y la reconstrucción de paz en Sierra Leona, en Colombia estudia la Ruta Pacífica de Mujeres como movimiento ante la guerra; también examina la redes transnacionales contra la guerra: Mujeres de negro, Código Rosa – mujeres por la paz, red de mujeres contra militarismo de Asia – este, el movimiento de mujeres en Serbia, Palestina – Israel, como también los éxitos y contradicciones de la liga internacional por la paz y la libertad, también Naciones Unidas (Cockburn, 2007). Encuentra que estos movimientos tienen en común la forma de organizarse de las mujeres en la protesta antibélica, poseen una responsabilidad colectiva, combinada con autonomía y creatividad individual. Está presente la idea de crear un grupo responsable, inclusivo y sin jerarquías, como también trabajar para que los grupos sean amables y no conflictivos, reconocerse y trabajar constructivamente.

Otro aporte importante es la investigación “Mujeres y la guerra: Des construyendo la noción de víctimas y reconstruyendo su papel de constructoras de paz” de Fatuma Ahmed Ali (2015). La autora realiza un recorrido desde el siglo XX hasta la actualidad de las diversas acciones y movilizaciones de las mujeres en diversos países de Europa, Asia, África, América, en donde se han presentado diversos conflictos. También señala que la guerra y su violencia impulsan a la organización, movilización e innovadoras acciones que inciden en la mediación de los conflictos y la construcción de paz. Presenta por ejemplo los casos de Irlanda, Serbia, la segregación étnica en Estados Unidos, la



guerra en Ruanda, el conflicto medio oriente que Palestina, Irán, Israel, Afganistán, menciona la acción de las mujeres en América latina y destaca las Madres y Abuelas de plaza de Mayo en Argentina, entre otros. Su propósito es ver la otra dimensión de la participación de las mujeres en la guerra, pues se ha estudiado más su papel como víctima y como parte de los actores en conflicto. La autora plantea que los procesos hacia la construcción de paz liderada por mujeres permiten unir y facilitar la paz sostenible entre hombres y mujeres, a su vez las transformaciones en los roles tradicionales de género llevan implícito un cambio social. El aporte del movimiento de las mujeres por la paz se dirige hacia la construcción de la sociedad que ha vivido el conflicto, para ello se promueven cambios estructurales, culturales e institucionales como parte de sus demandas y busca no ser excluidas de la esfera pública:

"Al analizar los movimientos de mujeres en el mundo, vemos que han sacrificado sus vidas para promover la paz, el desarrollo, la transformación de los conflictos, los derechos humanos, la gobernanza y la democracia, han desafiado al militarismo y luchado contra las injusticias sociales, el racismo y las dictaduras. Las mujeres han contribuido a la paz y a la transformación de los conflictos como activistas, sobrevivientes y líderes de comunidades, por lo que es importante recuperar sus voces y visibilizarlas". (Ahmed, 2015: 150 – 152)

El rol político de las mujeres en las sociedades en guerra con llevan a cambios, como bien los señala:

"A pesar del doloroso impacto de la guerra, como sobrevivientes, víctimas y constructoras de la paz, las mujeres organizan a sus comunidades para conseguir la paz a nivel local, regional o nacional. Se arriesgan a diario para reunir a familias, proporcionar cuidados y servicios de recuperación u organizar redes solidarias en distanciamientos étnicos, culturales o sociales. Las mujeres nos han enseñado formas alternativas de construcción de la paz, tales como mostrar su resistencia a la guerra con manifestaciones públicas, marchas, desobediencia civil y estrategias locales como desnudarse, canciones, metáforas, poemas, programas educativos, teatro o escribir y publicar los horrores de la guerra. También han organizado lobbies para conseguir un alto el fuego y acuerdos de paz" (Ahmed, 2015: 173)

En tal sentido la autora rompe con esa idea de que la mujer está en rol de víctima o como perpetuadora de la guerra y destaca el otro rol desconocido y poco evaluado como constructora de paz, se rompe con las formas dominación y plantea una opción pacífica que transforma la relaciones interpersonales y colectivas, como concluye la autora respecto a los movimientos de mujeres por la paz



Ahora bien, en América Latina difícilmente se puede hablar de movimientos por la paz, pues a diferencia con Colombia, que en su historia reciente posee un conflicto armado de más de cincuenta años. Sin embargo, al intentar establecer similitudes con movimientos de mujeres con reconocimiento político en otros países latinoamericanos coinciden que se configuran en torno a la defensa de los derechos humanos y la democracia. Este aspecto desborda el propósito de la investigación, pero sí permite rastrear experiencias importantes, especialmente cuando sus protagonistas son las mujeres.

Uno de estos movimientos en el caso de Argentina es el de “abuelas y madres de la plaza de mayo” (Veiga y Wulff, 2007), gestado contra el ejercicio de la violencia política en la dictadura, que implicó la violación de los derechos humanos y hoy con poseen un liderazgo político en la búsqueda de nietos y la penalización de los delitos. Han ganado un espacio significativo de orden socio político en el escenario de la democracia Argentina. Lo que significa la construcción de los movimientos que cobra una identidad política colectiva desde la ciudadanía y son la organización de mujeres que gana el espacio político con la gestación y consolidación del movimiento y que derivan de la violación de los derechos humanos (Jelin, 1987 y 2005:220).

Otra experiencia reciente en América Latina, que ha ganado un espacio político y se configura desde la organización de las mujeres ante la violación de los derechos humanos por la violencia política en México y es la movilización organizada de las mujeres de Ayotzinapa. Este caso se evidencia la violación de los derechos humanos y la organización de las mujeres que reivindican a las víctimas y reclaman justicia, como una “forma de denuncia, de resistencia y de unificación social desde abajo”(Islas, 2017:2009), tiene como antecedente un movimiento por la paz que contribuye a la resistencia de la sociedad, se reconoce las condiciones amenazantes que lleva a que la protesta social exprese solidaridad y con participación de los jóvenes, además se relaciona y crea alianza mutuas con otros movimientos, como el zapatista (Islas, 2017: 226 – 229), toda la movilización permitió crear una alternativa de participación política, reconocer y exigir el Estado del derecho, darse a conocer internacionalmente y disipa “la niebla de la guerra en México” (Islas, 2017: 233-234).

Aporte del feminismo a movimientos de mujeres pacifistas

Los movimientos de mujeres pacifistas están unidos a la reivindicación feminista. En tal sentido, el aporte del concepto de género desde la perspectiva histórica de las formas de dominación y las dimensiones del concepto en términos del reconocimiento y la



identidad que rompe con la condición subordinación (SCOTT: 1990). Junto a ello, el proceso de configuración de la identidad colectiva y el reconocimiento del sujeto político que constituye una identidad política expresada o manifiesta en la acción política (Butler, 2008: 45,48 – 51, 246).

Además de la construcción de identidad política y la acción está implícita la noción de cambio social, aparece en el debate teórico y develan una profunda transformación de la sociedad, se evidencia en los trabajos de Gargallo (2006: 14,117, 121, 151, 153), Mendoza (2014:97, 100, 102) y Carosio (2012: 10 - 11). En las tres autoras es relevante la noción de desigualdad y la relevancia de la lucha por los derechos sociales y políticos ante dicha desigualdad, la exclusión de género y la necesidad del reconocimiento de la condición de la mujer en la sociedad con derechos plenos y rompiendo con la dominación existente. También la creación de identidad colectiva en América Latina parte de la reivindicación de la mujer que se gesta en la continua violación de los derechos humanos (Jelin, 2005:220).

Otro elemento fundamental es la condición de subordinación que implica un orden de dominación estructural y al estar en situación de guerra la mujer es victimizada (Segato, 2003: 23,25, 36). Rita Segato, señala como la violencia moral es eficiente para el control social y la reproducción de las desigualdades, pues la violencia psicológica es eficaz para la desigualdad de género que naturaliza y banaliza la violencia (Segato: 2010: 113).

La misma autora en *“la guerra contra la mujeres”* (Segato, 2017) va hacer énfasis en la importancia de la categoría de género, posteriormente amplia lo que denomina “pedagogía patriarcal, la crueldad y la guerra o guerras del presente, enlaza con el patriarcado y los diversos poderes y las formas de violencia hacia la mujer, presentes en las distintas expresiones de guerras internas o conflictos armados, donde el feminicidio trasciende de lo privado para ser re - significado en las sociedades con conflictos de diversa índole y la mujer es victimizada, su cuerpo y las formas de la acción violenta como es el feminicidio y el femigenicidio, ambos tienen uso para el ejercicio de la dominación territorial, el control y mantenimiento de poder (Segato, 2017, 60 – 62, 70).

El movimiento feminista se rescata ante el conflicto presentar la paz con alternativa como “arma válida” es aquí que las mujeres abren un espacio en la política, en la ciudadanía y su representación con identidad que rompe con la dominación de una manera transversal, pues desde lo privado se irrumpe en lo público o se pretende



cambiar la configuración de dominación de la sociedad actual (Jelin, 1987: 147 – 149, 163 – 168, 344 - 349).

La discusión sobre el poder y noción de empoderamiento de la mujer se presenta en forma de balance y en la introducción del libro “ Poder y Empoderamiento de las Mujeres” (Leon, 1997:13- 22), presenta la diferencia entre el feminismo de primera y segunda generación y para luego señalar el desarrollo en América Latina y Colombia, especialmente sobre el cuestionamiento del ejercicio de poder, las relaciones de poder establecidas en la sociedad y en ese sentido como las mujeres se empoderan, expresan la emancipación, la búsqueda de romper con la multi dimensionalidad del poder, retomando el aporte de Foucault. También el empoderamiento de las mujeres se concibe como el cambio individual y al mismo tiempo hacia la acción colectiva. Este aspecto se evidencia en la concepción y la acción política de las mujeres pacifistas.

La ruta pacífica de las mujeres: Desafío a conflicto armado en Colombia

La Ruta Pacífica de las Mujeres surge en 1996 con la caravana y marcha hacia Mutatá – Antioquia, en un primer momento fue la unión de varias organizaciones de mujeres que se proponen denunciar y buscar una salida pacífica ante los hechos de violencia producidos por el conflicto armado. Se hizo énfasis en mostrar y reclamar sobre el efecto en el cuerpo y vida de las mujeres. A partir de ese momento se va conformando su organización que reúne a 300 organizaciones y grupos mujeres en 9 sedes regionales (Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca, Chocó, Putumayo, Valle de Cauca).

Es a partir de la interacción y el interés común de estas organizaciones que llegan a crear vínculos y acciones conjuntas cuando crece la violencia hacia mujer en Colombia, especialmente como víctima e instrumentalizada en el conflicto armado desde 1996 y las dos primeras décadas del S XXI.

La Ruta Pacífica de la Mujeres ha tenido continuidad y lograron consolidarse en tanto el conflicto armado se intensificó en territorio nacional, sus acciones lograron ganar espacio político y reconocimiento social. Se caracterizan por realizar movilizaciones que llaman la atención a la ciudadanía y exigen al Estado acciones y políticas públicas ante la violencia generada por actores armados contra las mujeres y el general a población civil, además de otras consecuencias sociales y económicas.

Desde 1996 hasta el 2016 se realizaron marchas en las ciudades principales de cada sede regional y la ciudad capital, Bogotá es ciudad de encuentro de las participantes de otras sedes. También han realizado caravanas a los lugares dominados por los grupos



armados y donde sus acciones bélicas realizan hechos de fuerte violencia hacia las mujeres y la población civil. En dichas caravanas participan mujeres de distintas organizaciones que componen la Ruta, provienen de las diversas regiones para llegar al lugar donde se apoya y se busca hacer visible los hechos violentos y el abuso de los derechos humanos por los grupos, a su llegada se realiza una marcha por vías principales y en la plaza principal, actos simbólicos, orientación para que puedan recibir ayuda de otras entidades e incluso de parte de la misma organización.

Otra forma de acción son los encuentros y plantones para denunciar, estos últimos han sido poco registrados por los medios de comunicación. Además, se han integrado a marchas convocadas por otras organizaciones y movimientos, especialmente ligadas a búsqueda de la paz, o al apoyar la continuidad de los diálogos de paz y avalar los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc y los diálogos con el Eln en el 2016.

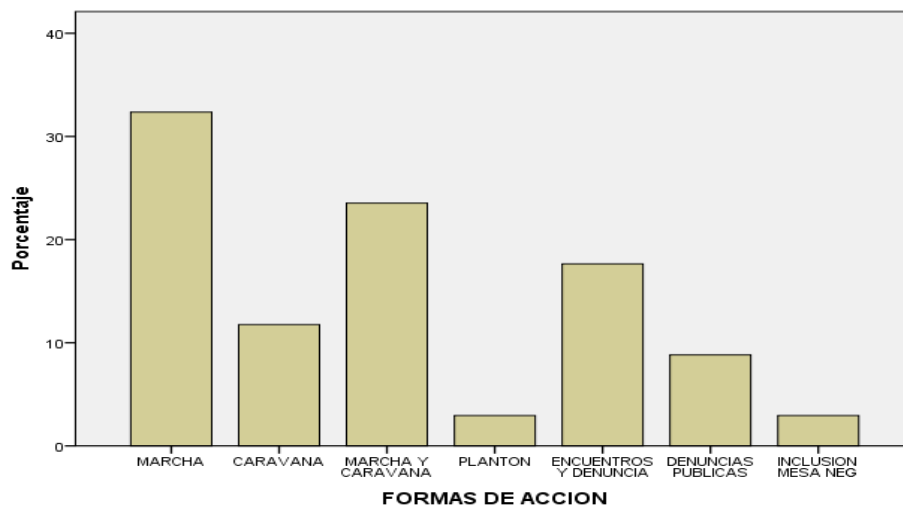


Grafico 1. Formas de acción

Fuente: Elaboración propia de base de datos de prensa 1996 – 2016

Estas acciones se realizan básicamente dos veces al año, el 25 de noviembre el día de “no violencia contra la mujer” y en el mes de Julio, en que se apoya la búsqueda de la paz en contextos de guerra y se solidariza con el movimiento “Mujeres de Negro”.

A partir de información de prensa nacional (El Tiempo, Espectador y Revista Semana), se estableció que en el periodo estudiado, la Ruta Pacífica de la Mujeres organiza una o dos movilizaciones por año. En el año 2000 se realizaron 4 movilizaciones (11% de las movilizaciones en el periodo estudiado), en años como el 2008, 2009, 2014 la Ruta



realizó solo una movilización y como también participan en acciones en que se integra con otros actores acordes con el propósito de la paz y la denuncia de la violencia.

Se toma de manera conjunta la decisión de movilizarse para generar un impacto no solo en lugar donde se llega, sino también en la ciudadanía, esta decisión es en concordancia con los objetivos misionales: buscar la salida negociada de conflicto para alcanzar una paz duradera y la denuncia de toda forma violencia con énfasis en la mujer y la exigibilidad de sus derechos. Así lo expresa la coordinadora de sede Cauca:

“...estamos conformadas por muchas organizaciones y procesos de mujeres, de base, que tienen sus propio proceso organizativo, pero que también le apuestan a los principios y objetivos de la Ruta, que es parar la guerra con la salida negociada y política del conflicto armado, visibilizar los efectos en el cuerpo y la vida las mujeres. Y exigir la participación de las mujeres en las políticas públicas en el proceso de construcción de paz.” (Entrevista # 4 Coordinadora sede Cauca).

Cuando se reanudan diálogos con los actores armados y el estado después de 2012 con momentos inciertos y sin muchas certezas de llegar a los acuerdos, la Ruta Pacífica orientó las acciones que expresaban la importancia y necesidad de persistir en los diálogos y continuar con el proceso de negociación:

“...Nosotras siempre cuando veíamos los momentos de crisis de la negociación salíamos a movilizarnos, ósea nuestro papel fue muy activo en este proceso de negociación. Porque siempre fue poner la alerta de lo delicado de que este proceso fracasara e invitar a la sociedad civil y la sociedad en general a rodear el proceso y exigir el derecho a la paz. Digamos eso fue como una consigna muy importante. Las mujeres pasaremos, la paz es imparable” (Entrevista # 4 Coordinadora sede Cauca)

Las marchas en que confluyen mujeres participantes de todas sedes, estas representan el 32% de acciones colectivas en el periodo estudiado, las caravanas con marchas a un punto de llegada representan el 35,3 % de la acciones realizadas por la Ruta Pacífica, en menor proporción se encuentran los encuentros y denuncias (17,6%), solo denuncias públicas (8,9%) y plantones (2,9%). Claramente se constata que las acciones que revisten mayor envergadura por la amplia participación, el repertorio y los recursos utilizados están en las marchas y las caravanas a los lugares de llegada escogidos por la magnitud de los efectos de la guerra y en territorios excluidos del país.

Las marchas, encuentros y denuncias de orden nacional y regional se han realizado en su mayoría en Bogotá, también en ciudades capitales de departamento como Medellín, Cartagena, Quibdó, Barrancabermeja, Popayán, que tienen en común la incidencia del



conflicto armado y el incremento de las diversas formas de violencia. Las caravanas acompañadas con marchas se dirigen a localidades en que la población civil, dentro esta, las mujeres sobrevivientes han sido víctimas de abusos sexuales, despojo y desplazamiento forzado por la ocupación del territorio de los grupos armados, como las movilizaciones hacia Mutatá, Putumayo, Buenaventura, Quibdó. Otras acciones como la realizada en puente de Rumichaca en la frontera colombo - ecuatoriana incluída otros contenidos, como las relaciones entre los países, la fumigación de con glifosato los efectos en la población y medio ambiente.

Ahora bien, en las diversas acciones se destaca la organización, convocatoria y la misma ejecución de la Ruta Pacífica de las Mujeres en las formas de acción; es importante observar otros *actores secundarios* que participan, señalan alianzas que son continuas y han acompañado a la Ruta Pacífica desde sus inicios, como también son actores coyunturales y su participación está mediada por los hechos de orden socio político en momento dado y sobre los cuales se pretende incidir. Se destaca que ha habido acciones en que algunas organizaciones feministas se integran a las movilizaciones sin ser necesariamente miembros activos de la Ruta Pacífica de Mujeres (representan 38,7%), está presente Organización Popular Femenina (representa el 5,9%), también están actores en las movilizaciones que exigían la negociación y denunciaban los efectos de la guerra en la población y sobre todo en las mujeres sobrevivientes, entre estas esta organizaciones indígenas y afro descendientes (representan el 11,7%), organizaciones pacifistas (con el 2,9%), cuando se realizaron las movilizaciones masivas como la del 2015, participaron el representante de la ONU y el comisionado de paz, en momentos tensos de los diálogos de paz, representan el 2,9 %, en las misma proporción están las organizaciones de víctimas y la unidad de atención de víctimas del conflicto.

La anterior señala organizaciones aliadas, que por región pueden diferenciar dado las trayectorias organizativas, se destaca la participación y alianza con las organizaciones de carácter étnico, campesinas, en algunas ocasiones de organizaciones de sindicales y como también las organizaciones pacifistas como Indepaz, Mujeres por la paz, en momentos específicos de las acciones conjuntas de la sociedad civil por la paz. Existen otro tipo de actores de aliados como la cooperación internacional contribuyen en proyectos con financiamiento, también el movimiento Mujeres de Negro (estos son elementos que se ampliarán en la estructura y operatividad de la organización).



Otro elemento fundamental de la acción colectiva en el *discurso* que expresa un conjunto de demandas al actor contendor, estas tienen una relación con los propósitos de la Ruta Pacífica: “lograr una salida negociada al conflicto armado y construir una paz duradera, con reparación a las víctimas, teniendo en cuenta que son las mujeres más afectadas por las violencias”. Como feministas y pacifistas, se expresa su contenido en las consignas, pancartas, comunicados y en los cuerpos con un uso simbólico, además actividades culturales (danzas, cantos, entre otros) dentro de las manifestaciones. Se busca mostrar de manera clara y contundente los “abusos y la violencia contra las mujeres por parte de los actores armados, especialmente entre 1998 – 2010, años de fuerte intensificación del conflicto armado. Consignas como “No parimos hijos para guerra”, “el cuerpo de la mujeres no es botín de guerra”, “ni una más para guerra”, “ni una guerra que nos mate, ni una paz que nos oprima”. Estas consignas reúnen el sentido reivindicativo de la mujer y a su vez mostrar la denuncia y postura de las mujeres ante la guerra, especialmente por el reclutamiento forzado, abusos sexuales por parte de los grupos armados a las población civil y a las mismas combatientes. Este tipo de consignas están presentes en todas las acciones colectivas y representan el 85,1%.

También están las consignas que aluden directamente a las exigencias de buscar paz a través de la negociación entre los actores implicados como “ni un día más para guerra”, “acuerdo humanitario ya”, también la denuncia en contra del “horror y violación de los derechos humanos”, la “agenda de paz de la mujeres”, o para avalar la proceso de negociación “las mujeres paz haremos, refrendando la paz”, están explícitas en el 55,8% de las movilizaciones, junto a las otras consignas mencionadas anteriormente. En el gráfico N° 6 se observa las formas del discurso o demandas en las acciones colectivas.

Al mirar la expresión de estos intereses por año, estos matices se observan más claramente. En los primeros años hasta el año 1999 se expresa la denuncia de la violencia contra mujer, la resistencia de las víctimas, no la guerra y defensa de los derechos son expresadas en 4 acciones entre 1996 – 1999. En el 2000 es claro la exigencia de la paz y la no violencia con cuatro (4) movilizaciones. En el 2004 en dos (2) movilizaciones la motivación se expresa en “No a la guerra y salida negociada al conflicto”, en el 2009 surge un variación en donde se incluye el camino de la paz, justicia y verdad”, este es un claro interés después de la desmovilización de los paramilitares y la puesta en marcha de “la justicia restaurativa” en segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe.



Con el gobierno de Juan Manuel Santos se reanuda un proceso de paz con la guerrilla de las Farc, posteriormente con el Eln, las ocho (8) movilizaciones muestra una variación, se exige “paz, justicia y verdad”, como también “memoria, justicia y reparación” que centra la atención en las víctimas.

Respecto a la *capacidad de convocatoria* de la Ruta Pacífica de las Mujeres es bastante amplia en las acciones que realiza, teniendo en cuenta su composición de varias organizaciones que se integran y crean una red, además de acuerdo la preparación y logística en preparada en con meses de preparación, con planeación, como lo describe una de sus participantes de la sede Valle haciendo referencia a la caravana y marcha hacia Putumayo en el 2003 en que participaron 3500 mujeres:

“... fue la primera caravana que participe... el corazón se volcaba de la emoción de ver que uno podía contribuir a lograr algo con esa manifestación. Por eso nos pronunciamientos. ... todo fue gestionado, en la logística, todo fue planeado, uno duerme en las escuelas, en casa comunales, por ejemplo con el mismo alcalde, eso fue Puerto Caicedo que llegamos. Y el pueblo estaba muy contento de ver que se acordaban de ellos, de que sabían de la problemática, de lo que íbamos hacer allá. ...la preparación custodiado, tiene saber quiénes van, custodiados con helicópteros, con todo.se preparó durante casi seis meses, lo logística se planeó. La movilización duro como tres días... Esa es de las más masivas e importantes, participaron como más de 3000 mujeres” (Entrevista N° 2, líder con trayectoria – sede Valle).

Uno de la acciones con mayor participación e implicó una preparación de más de seis meses fue la realizada en Popayán en el 2015, posterior a la construcción de las agendas de paz y se realiza con intención de “refrendar la paz” en momentos en que la negociación entre la Farc y el gobierno mostraban gran incertidumbre, participaron 7000 mujeres que llegaron de 142 municipios del todo el país según los datos de prensa y la información presentada por la Ruta Pacífica de acuerdo con su registro y publicada en página web, además de testimonios de activistas:

“...fue la masiva, alrededor de 7000 mujeres, esperábamos 5000 y se superaron las expectativas, vinieron de todas las regionales, de Bolívar, de Chocó, Antioquia, Putumayo, Santander, Cundinamarca, Valle y más las organizaciones de aquí del Cauca. Entonces se superaron las expectativas, también se mandó un mensaje muy claro, mostrar que era la apuesta de un gran sector de mujeres en Colombia; si porque nosotros no tenemos la voz de la todas mujeres de Colombia, somos parte. Digamos que esa es una movilización muy grande y el mensaje era contundente. Cada movilización que se hace busca dejar un mensaje con contundencia, es ese caso era las mujeres pasaremos



refrendando la paz, es decir, que íbamos a refrendar el acuerdo que se estaba haciendo entre el gobierno y las Farc, que era un acuerdo necesario, animando a la sociedad para rodeáramos el proceso de paz” (Entrevista # 4 Coordinadora sede Cauca).

Dada la coyuntura política la acción colectiva puede modificarse, detrás de cada acción existe un fuerte trabajo previo de organización, acompañado del proceso formativo de las mujeres y los grupos a los que pertenecen. La preparación y organización se logra por la participación de la red de organizaciones de mujeres que la componen y se han mantenido activas, lo que permite su presencia en las marchas, caravanas, encuentros y plantones.

A continuación se muestra una tabla resumen de las acciones realizadas solo por de la Ruta Pacífica y tomada de su página web www.rutapacifica.org.co

Lugar	Año	Forma de acción	Numero de participantes
Mutató	1996	Caravana	2000 mujeres
Suroeste de Antioquia	1997	caravana y marcha	1500 mujeres
Cartagena	1999	Marcha	2000 mujeres
Barrancabermeja	2000	Marcha	2500 mujeres
Barrancabermeja	2001	Marcha	2500 mujeres
Medellín	2001	Marcha	1000 mujeres
Putumayo - Puerto Caicedo	2003	caravana y marcha	3500 mujeres
Chocó	2004	Marcha	500 mujeres
Popayán	2005	Marcha	1600 mujeres
Quibdó	2005	Marcha	3000 mujeres
Buenaventura	2007	Caravana y Marcha	2000 mujeres
Frontera Colombia - Ecuador, P. Rumichaca	2007	Caravana y Marcha	5000 mujeres
Bogotá	2009	Marcha	10000 mujeres y hombres
Bogotá	2011	Encuentro internacional de mujeres de negro	400 mujeres colombianas y 100 de otras nacionalidades
Bogotá	2013	Gran movilización, marcha	4500 mujeres
Bogotá	2013	Marcha	1000 mujeres
Popayán	2015	Marcha	7000. eres

*Tabla 1. Número de participantes por año y forma de acción
Fuente: elaboración propia tomada de www.rutapacifica.org.co*

Desde su inicio su acción establece un rol diferencial respecto a las otras organizaciones y acciones colectivas por la paz, por constituirse un movimiento solo de mujeres con independencia y autonomía para realizar su lucha por la construcción de paz, lo que implica transformaciones con equidad de género en las relaciones con estado, y su vez impacta en la vida económica, social y cultural por la forma en participa la mujer, como par y transformando relaciones de subordinación.

Conclusiones

La Ruta Pacífica de la Mujeres como parte de sociedad civil y como feministas se constituyen en movimiento derivado de la violencia dada por la guerra irregular. Es la



lucha las mujeres que permitió enfrentar el miedo y hacer sentir su voz en los espacios devastados por la guerra, es la resistencia de las mujeres y sus familias victimizadas. Su acción muestra de modo particular la articulación en red con diversas organizaciones del país, y alianzas internacionales como las Mujeres de Negro.

Han logrado reconocimiento social e identidad colectiva, su reivindicación es claramente una acción política ante el Estado y el conjunto de sociedad. Denuncia, reclama y propone la construcción de la paz ante el Estado, demás actores de conflicto y la sociedad. Así como también la justicia, reparación de las víctimas con una diferenciación de género y buscado acciones inclusivas e equitativas. Sus acciones se sustenten con el trabajo con las mujeres víctimas sobrevivientes, han realizado la investigación sobre la violencia ejercida contra las mujeres que revela la realidad de violencia en el contexto de la guerra. Junto a ello mantiene un proceso formativo dirigido hacia ella y a mujeres activistas de las organizaciones que componen el movimiento, lo que permite su consolidación.

Finalmente, devela a la sociedad y a los Estados del mundo globalizado de hoy que la mujer es sujeto activo de derechos, centrando su proyección política en la construcción de una sociedad incluyente y justa, lo que implica transformaciones a corto y larga plazo, concertación de diversas voluntades políticas, lo que significa una permanencia en la lucha y el propósito de la misma, trabajando por un cambio profundo de la sociedad de mundo de hoy.

Bibliografía

Ahmed Ali, Fatuma, (2015). Mujeres y la Guerra: desconstruyendo la noción de víctimas y reconstruyendo su papel de constructoras de paz, Ed. Universidad Jaime I, Castello de la Plana.

Butler, Judith (1990). El género en disputa: feminismo y subversión de identidad. Ed. Paidós, Buenos Aires- México.

Buellen, Margaret y DIEZ, Carmen (Comps.), (2008). Retos Teóricos y Nuevas

Carosio, Alba, (coordinadora), (2012). Feminismo y Cambio Social en América

Centro Nacional De Memoria Histórica, (2018). Estadísticas del Conflicto, www.centrodememoriahistorica.gov.co, Bogotá

_____, (2018). Sujetos victimizados y daños causados. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico, Ed. Desde Abajo, Bogotá



- Cockburn, Cynthia, (1999), "Gender, Armed Conflict and Political Violence, in: the World Bank, Washington, dc, file:///D:/gloria%20ines/Downloads/Gender_armed_conflict_and_political%20(1).pdf_
- Cockburn, Cynthia, (2007). *Mujeres ante la Guerra: de donde estamos*, Ed. Icaria Antraxyt- Mujeres, Voces y Propuestas, Verdarguer, Romanya.
- De Sousa Santos, Boaventura, (2001). "Los nuevos movimientos sociales", en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N° 5, Septiembre.
- Diez J., Ma Elena Y Sanchez R., Margarita, (2010), *Género y Paz*, ED. Icara editorial S.A, Barcelona.
- Garcia Sj, Mauricio, (2006), *Movimiento por la Paz en Colombia*, Ed. Cinep, Naciones Unidad y Colciencias, Bogotá.
- Gargallo, Francesca, (2006), *Ideas Feministas Latinoamericanas*, segunda edición, ed. UNAM, México.
- Gene Sharp, (2002), *Real Realistic Alternatives: There are Realy Strategy*, Ed. The Albert Einstein Institute, Boston.
- Gramsci, Antonio, *Cuadernos de la Cárcel*, (1979). Tomo V, Cuaderno 13, notas 2 y 17. Ed. S. Fondo de cultura económica, México.
- _____, (2015), *Antología*, ed. AKAL, Madrid.
- Grueso, Delfin y Castellanos, Gabriela, (2010). *Identidades Colectivas y reconocimiento: Razas, etnias, género y sexualidades*, ed. Universidad del Valle, Cali.
- Chinas, Carmen y Preciado C., Jaime, (2017), *Reflexiones sobre Ayotzinapa*, ED. Universidad de Guadalajara, Guadalajara.
- Hernandez D, Esperanza, (2016), *Empoderamiento Pacifista del actual proceso de paz en Colombia 2012 - 2015*, En: *Revista Paz y Conflicto*, VOL. 8 N°2, Bogotá.
- Ibarra Melo, María Eugenia, (2007), "Transformaciones y fracturas identitarias de las mujeres en la acción colectiva por la paz" en: *Revista Manzana de la Discordia*, Centro de estudios de Género, Mujer y Sociedad, Año 2, Volumen 4. Ed. Universidad del Valle, Cali.
- Jelin, Elizabeth, (2005). *Exclusión, memorias y luchas políticas En libro: Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas*. Daniel Mato. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. pp. 219-239.
- _____, (1987), *Ciudadanía e Identidad: las Mujeres en los Movimientos Sociales Latinoamericanos – introducción*, ed. Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas, Ginebra.



Lagarde Y De Los Ríos, Marcela, (2008). *“Antropología, feminismo y política: Violencia Feminicida y Derechos Humanos en las Mujeres”* en Buellen y Diez, Retos Teóricos y Nuevas Prácticas, Ed. UNAM, México.

Laraña, Enrique, (1999), La actualidad de los clásicos y las teorías del comportamiento colectivo (capítulo 1) e Introducción, en: La construcción de los Movimientos Sociales. Madrid: Alianza Editorial.

Lamus, Doris, (2008). La transgresión de la cultura patriarcal: movimiento feminista en Colombia 1975 – 1995, en Revista Polis, Universidad Bolivariana de Chile, Santiago, No. 20, Agosto de 2008. <http://www.revistapolis.cl/polis%20final/20/inicio.htm>.

_____, (2009), Movimiento Feminista o Movimiento de Mujeres en Colombia, Ed. Centro De Investigaciones Socio Jurídicas, Universidad De Antioquia, Medellín.

Leon Magdalen (COMP), (1997), Poder y Empoderamiento de las Mujeres, Ed. Tercer mundo y ed. Universidad Nacional, Bogotá.

Magallón Portelés, Carmen, (2006), “Las Mujeres en procesos de Paz en el mundo: pensamiento y prácticas” (ponencia), sobre el texto *“Las mujeres en pie de paz”*, ed. siglo XXI, Madrid.

Melucci, Alberto, (2003). Challenging Codes, Collective action in the information age, Cambridge University Press, 1996, digital printing.

Modonesi, Massimo, (2010), Subalternidad, Antagonismo, Autonomía: marxismo y subjetivación política, Ed. CLACSO, UBA, Prometeo Libros, Buenos Aires.

Oliver, Lucio y Savoia, Francesca, 2011 “El 2010 en América Latina. La compleja y difícil lucha por una nueva hegemonía” en OSAL, Buenos Aires: CLACSO, Año XII, N° 29, mayo

Palacios, Marco, (2012), Violencia pública en Colombia, 1958 – 2010, Ed. Fondo de Cultura Económica, Bogotá.

Panfichi, Aldo (coord.) (2002). Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: América y Cono Sur. México: Fondo de Cultura Económica.

Pecaut, Daniel., (1987), Orden y Violencia en Colombia 1930 – 1954, ed. S XXI – CEREC. Bogotá.

_____, (2003). Violencia Política en Colombia. Elementos de Reflexión. Ed. Hombre Nuevo y Facultad de ciencias sociales y económicas de Universidad del Valle, Medellín.



_____, (2015). Una Lucha armada al servicio de statu quo social y político, En: En: Centro Nacional de Memoria Histórica, Contribución al entendimiento del Conflicto Armado en Colombia, Ed. Desde Abajo, Bogotá.

Rebón, Julián y Pérez, Verónica, (2012). Las Vías de la Acción directa, Ed. Aurelialibros, Buenos Aires.

Rettberg, Angelika, (2006), Buscar la Paz en medio del Conflicto: un estudio de las iniciativas de paz en Colombia (desde los años noventa hasta hoy), Ed. Uniandes - CESO, Programa de investigación para la construcción de paz en Colombia - COPAZ, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, Bogotá.

_____, (2006), Preparar el futuro: conflicto y posconflicto en Colombia, ed. Uniandes, Bogotá

Romero, Mauricio, (2002). Paz, reformas y cambio en la sociedad civil colombiana. En: Panfichi, Aldo. (coord.). Sociedad Civil, Esfera pública y Democratización en América Latina: Andes y cono sur. México: Fondo de Cultura Económica y Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Rauber, Isabel, (2005), Movimientos Sociales, Género y Alternativas en Latinoamérica y el Caribe, ED. IUED, Génova.

Segato, Rita L., (2003). Las Estructuras Elementales de la Violencia, 1° edición, Ed. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

_____, (2017), La Guerra contra las Mujeres, 1° Ed. Traficantes de Sueños y Ed. Tinta Limón, Madrid.

Seoane, José, Tadei Emilio, Algranati, Clara, (2006). "Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina", en Boron, Atilo y Lechini, Gladis (Comp.), Política y Movimientos Sociales en un Mundo Hegemónico, Buenos Aires, ed. CLACSO.

Scott, Joan, (1990). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En *Historia Género: las mujeres en Europa moderna y contemporánea*, Ed. Nash y Amelash.

Tarrow, Sidney, (1997). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Universidad.

Tilly, Charles, (1978). "Theories and Descriptions of Collective Action" (capitol 2) y "Interests organization, and mobilization" en: An urban World. Boston: Addison – Wesley Publishing Company.

_____, (1991). Modelos y realidades de la acción colectiva popular. En: Intereses individuales y acción colectiva. Fernando Aguilar Compilador Editorial Pablo Iglesias. Madrid, España.



_____ y Wood, Lesley J., (2009) Los movimientos sociales 1768 – 2008: Desde sus inicios a Facebook, ed. Crítica, Barcelona.

_____, (2007) Violencia Colectiva, ed. Hacer, Barcelona.

_____ (1978), Theories and Descriptions of Collective Action, Cap II: interests, organization and mobilization. EN: An Urban World, Ed. Addison - Wesley Publishing Company, Wesley.

Touraine, Alain, (1997). ¿Podremos vivir juntos? La discusión permanente: el destino del hombre en la aldea global. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Argentina.

URIBE C, Hernando, Montoya D., Gloria Inés, (2011). El espacio como lugar en la acción colectiva: La necesidad de dimensionar lo espacial en la teoría de la acción colectiva, Ed. Universidad Autónoma de Occidente, Primera edición, Cali.

Uribe, María Victoria, (2009). Memoria en tiempos de guerra: Repertorio de Iniciativas, CNRR Memoria Histórica, Ed. Puntoaparte, Bogotá.

Vargas V., Virginia, (2005), Feminismo latinoamericanos en su tránsito al nuevo milenio. Una lectura político personal, *En libro: Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas*. Daniel Mato. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. pp. 379-400.

Weiga, Clarisa Y Madarriaga, ABEL, (2007), Las abuelas: 30 años de Búsqueda: las abuelas de plaza mayo, Ed. Virtual - Abuelas Plaza de Mayo, Buenos Aires,



La lucha por la vejez y envejecimiento dignos a través de las organizaciones y movimientos de la sociedad civil internacional¹

Paola Carmina Gutiérrez Cuéllar²
Mariana Aparicio Ramírez³

Resumen

La población mundial está envejeciendo y lo seguirá haciendo de manera consistente en las siguientes décadas. En 2017, la población mayor de 60 años era el 12 por ciento mundial y se estima que para 2050 se trate del 22 por ciento. La finalidad de la investigación es a través de la inferencia descriptiva, desarrollar un balance de la formación de demandas sociales alrededor del envejecimiento y la movilización de la sociedad al respecto, para presentar cómo el proceso de envejecimiento siendo un fenómeno mundial en el que todos los seres humanos estamos inmiscuidos, se ha ido posicionando como un tema de relevancia social, que moviliza a sectores de la sociedad civil, conforma agendas de gobierno y adquiere presencia en la esfera pública internacional y nacional, para llegar a la formulación del resguardo de los derechos de las personas mayores. Para ello, primero se esbozan algunos postulados teóricos sobre los nuevos movimientos sociales que nos permiten tener un marco de referencia para el estudio de las OSC a favor de la vejez digna, posteriormente, se identifican y describen algunas organizaciones de la sociedad civil que luchan por el envejecimiento y la vejez y algunas de las principales demandas. Por último, se observa la lucha organizada y coordinada con las instituciones internacionales y gobiernos, y se corrobora la influencia de las mismas en la definición del problema público nacional e internacional.

Palabras clave

Derechos de las personas mayores; Vejez digna; Agenda pública; Nuevos movimientos sociales; OSC.

Introducción. ¿Por qué la vejez es un tema que movilice a las sociedades?

El envejecimiento de la población en el mundo es un hecho incuestionable y cada vez más analizado que nos pone frente a una realidad diferente en muchos sentidos. En el plano económico, porque hay más población que requerirá de una pensión, medicamentos y cuidados especializados de la salud. En el social, porque habrá más familias extensas cuidando a sus personas mayores, o personas mayores viviendo solas o familias recompuestas que podrían incluir a personas mayores. En el cultural, porque habremos de ir modificando las ideas y estereotipos de lo que significa ser viejo en



diferentes sociedades y grupos. En lo administrativo y gubernamental, porque será fundamental que se tomen decisiones de gobierno y se planeen y conduzcan políticas públicas para este grupo social.

La población mundial está envejeciendo y lo seguirá haciendo de manera consistente en las siguientes décadas. En 2017, la población mayor de 60 años era el 12 por ciento mundial y se estima que para 2050 se trate del 22 por ciento.⁴ Existen países en donde este proceso de envejecimiento ha comenzado desde hace varias décadas y otros en los que apenas se ha comenzado a observar como fenómeno social. De acuerdo con Anderson y Sotir, dentro de varios países industrializados, Japón es el que mayor población envejecida tiene, en 2020 su población mayor de 60 años será del doble de la tuvo en el año 2000.⁵ Por continente, el de mayor población envejecida es Asia, seguido por Europa y América del Norte y posteriormente América Latina y el Caribe, y por último África.⁶ En cualquiera de los casos, este cambio poblacional⁷ ha despertado el interés social y la preocupación estatal por mejorar las condiciones de vida de las personas envejecidas y las que están envejeciendo, pero también de las siguientes generaciones que llegaran a vivir aún más años en la etapa de vejez.

Hoy en día la población mundial puede esperar vivir más allá de los 60 años, y ser viejo tiene significados diversos en diferentes contextos y épocas. En occidente, hemos pasado de significar la vejez como la espera del final de la vida, a significarla como otro lapso de la vida que incluye un mayor cuidado de la salud, un nuevo tiempo libre, algunos olvidos y diversos cambios físicos.⁸ En general, las percepciones sobre la decrepitud, disfuncionalidad y carga social de la vejez se han comenzado a acompañar de otras ideas que las van difuminando conforme la población envejecida ha mostrado una faceta social diferente, una en donde no sólo son dependientes de sus familiares o del sistema de pensiones, sino también colaboran con la reproducción social cuidando nietos y familiares, atendiendo los hogares y apoyando a las familias, y autodefiniéndose como miembros económicamente productivos de la sociedad. Labores que no tienen una remuneración o valoración productiva, pero sin las cuales las sociedades no podrían seguir reproduciéndose.⁹

De esta manera, al ir aumentando la población mayor de 60 años y disminuir la tasa de nacimientos; se han presentado escenarios no antes vistos, entre los que observamos a la movilización y organización de la sociedad civil y la acción Estatal en torno a los cambios que se generan. La finalidad de este capítulo es a través de la inferencia descriptiva, desarrollar un balance de la formación de demandas sociales alrededor del



envejecimiento y la movilización de la sociedad al respecto, para presentar cómo el proceso de envejecimiento siendo un fenómeno mundial en el que todos los seres humanos estamos inmiscuidos directa e indirectamente, se ha ido posicionando como un tema de relevancia social, que moviliza a sectores de la sociedad civil, conforma agendas de gobierno y adquiere presencia en la esfera pública internacional y nacional, para llegar a la formulación del resguardo de los derechos de las personas mayores. No se pretende ser exhaustivas en el análisis de las OSC, ni tampoco presentar una evaluación de sus logros o alcances, tratamos más bien de hacer una descripción general, de cómo fueron evolucionando las demandas en torno a la vejez y el envejecimiento.

La ponencia se compone de los siguientes apartados: primero se esbozan algunos postulados teóricos sobre los nuevos movimientos sociales que nos permiten tener un marco de referencia para el estudio de las OSC que realizan acciones en torno a la defensa de los derechos de las personas mayores en el contexto internacional. En el segundo apartado, se identifican y describen algunas organizaciones de la sociedad civil que luchan por el envejecimiento y la vejez (digna, activa, exitosa y visible) a nivel internacional para, en el tercer apartado presentar algunas de las principales demandas de estas OSC y los Organismos Internacionales que promueven la lucha por derechos humanos de las personas mayores. Por último, se presentan las reflexiones finales en torno a los derechos de las personas mayores y su importancia en el ámbito internacional.

Acción colectiva, movilizaciones y organización de la sociedad civil

Tal y como se ha analizado desde la teoría social, los movimientos sociales del siglo XX y XXI han dejado de estar definidos por las estructuras sociales e institucionales, y han pasado a componerse por identidades, necesidades específicas, y afinidades seleccionadas por los individuos.¹⁰ Esta modificación de los objetivos también se ha visto acompañada por un cambio en las formas de organización y generación de la acción colectiva.¹¹ Hoy en día el conflicto y descontento social se manifiesta más por la protesta organizada, la solicitud de soluciones a problemas públicos a las instituciones nacionales e internacionales y la emisión de declaraciones y posicionamientos que por la protesta enérgica, espontánea e incluso violenta de los grupos.¹²

Desde la Sociología, la acción colectiva ha sido analizada a partir de dos perspectivas: como una desviación del comportamiento normal y esperado, un poco al estilo de Durkheim¹³ con su preocupación por la anomia, y en segundo lugar, como un



comportamiento en contra de las normas vigentes, del *estatus quo* y el sistema. Siendo este último caso, en donde se expresa la necesidad de cambiar o transformar el *estatus quo*,¹⁴ y desde el cual ubicamos que se insertan las movilizaciones de la sociedad civil en torno a la vejez. Es desde esta perspectiva que se analizaron los diversos sucesos del siglo XIX y XX ocurridos en Europa y América: revoluciones, guerras mundiales y guerras civiles, revueltas y protestas que dejaron como resultado grandes cambios, acompañados de costos humanos y económicos. Pero como las sociedades están en constante cambio, el descontento social, la necesidad de vivir en condiciones diferentes a las normas y la lucha por ideales y formas de vida diversas siguen siendo el motor general de esas movilizaciones sociales que expresan algunas formas de vida y valores preponderantes en las sociedades.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación por mantener la paz de gobiernos, países, organizaciones y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevó a tratar de mantener el control y las condiciones mínimas de reproducción social para evitar nuevos levantamientos. Además de promover el progreso económico de los países que habían sido devastados por la guerra, se buscaba promover nuevos sistemas políticos y económicos que llevaran al desarrollo a las que eran de por sí las sociedades más pobres, injustas y desiguales, una de las justificaciones que inspiró la creación de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1966.

Los cambios en el plano político y económico también propiciaron estas condiciones y pronto los sistemas democráticos y el neoliberalismo permitieron un tipo de acción colectiva organizada e institucionalizada denominada sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones de la sociedad civil. En esta versión —a diferencia de otros tipos de acción colectiva como las huelgas y las revoluciones— la sociedad civil se organiza y promueve cambios y mejoras en las condiciones de vida utilizando las estructuras institucionales y políticas vigentes y no estando en contra de ellas. Ésta sería una primera característica de los “nuevos movimientos sociales”.

Ya no son movimientos de clase o grupos políticos que buscan cambios de valores, del sistema político y económico, como lo fue en el marco de la Guerra Fría, la confrontación ideológica, política y económica del occidente vs URSS y sus respectivos aliados, sino que ahora se trata de acciones colectivas más focalizadas, la mayoría de ellas en torno a algún derecho o condición social que merece ser reconocido como un derecho humano. Incluso, los movimientos en contra del neoliberalismo de fines del siglo XX y



principios del XXI, aglutinados en el altermundismo,¹⁵ se fueron formando alrededor de algunos de los efectos del nuevo sistema económico a nivel mundial en lugar de enfrentarse a todo el sistema económico.¹⁶

Para Geoffrey Pleyers se trata justo de uno de los resultados de la globalización y los cambios sociales que en ella se suscitan, pues es en estos contextos, donde los ciudadanos tienen espacios nuevos para construirse como actores sociales y también de manera individual. Pero esta vez, no tratan sólo de incidir en los valores que juegan en la política y la toma de decisiones, sino en sus propias vidas y valores: “la orientación general (de los activistas) está en la consciencia entre sus valores y sus actos, refiriéndose al eslogan de Gandhi “sean el cambio que quiere ver el mundo”.¹⁷

Estas expresiones de la acción colectiva se construyen bajo dos vías que funcionan en el sistema globalizado: una la vía de la razón y otra la vía de la subjetividad, según el mismo Pleyers¹⁸. Desde la perspectiva de la vía de la razón, los ciudadanos que se movilizan no son pobres y obreros, sino clases medias, educadas, adiestradas y capacitadas. Por lo tanto, también más informadas incluso de los temas sobre los cuales se legislan y toman decisiones de política pública. Su movilización se ha desarrollado alrededor de las políticas necesarias para el crecimiento del capitalismo neoliberal, haciendo uso de la ciencia y la tecnología con la finalidad de mostrar las ineficiencias e injusticias de las políticas neoliberales. “Comparten una visión del cambio social impulsada desde la participación ciudadana en los debates públicos, y que genera una mejor regulación de la economía por las instituciones. Consideran que el mayor reto es tener una nueva relación entre la economía y los asuntos sociales y políticos”.¹⁹

La segunda vía, de acuerdo con Pleyers, la de la subjetividad, sostiene que otras movilizaciones y protestas se construyen a partir de la defensa de sus experiencias y autonomía a nivel comunitario e individual. Su acción tiene un sentido relevante para los actores en tanto las experiencias vividas y las posibilidades de experimentar las mejoras sociales desde el plano interno de los problemas sociales, y no desde fuera de ellos a través de expertos. Por esta vía, el descontento con el subempleo, la flexibilidad laboral y la corrupción no son sólo de un problema derivado de la democracia institucional sino también de la que ejercen los ciudadanos de manera cotidiana, por lo que el cambio debe provenir de ambos lados.²⁰

Una de las formas en que se han ido institucionalizando los movimientos sociales es a través de la organización en grupos de la sociedad civil, es decir, grupos que van adquiriendo permanencia, reconocimiento, legalidad y formalidad. Sus acciones tienen



la finalidad de presionar a la comunidad internacional y los gobiernos nacionales, así como posicionar temas en la agenda pública y lograr mejores condiciones de vida para ciertos grupos y el reconocimiento de derechos humanos. Para algunos autores como Vargas,²¹ la sociedad civil representa una forma de presión a los tomadores de decisiones que opera dentro del sistema neoliberal en conjunto con sus gobiernos, pues es la parte crítica de la sociedad que, sin hacer política, promueve cambios sociopolíticos y económicos. Lo nuevo no es propiamente la sociedad civil, sino más bien la organización y reconocimiento gubernamental dentro de las sociedades modernas con tintes democráticos.

Estas organizaciones pueden enmarcarse tomando en cuenta la teoría de Geoffrey Pleyers²² en la vía de la razón:

*Resaltan la urgente necesidad de contar con instituciones internacionales más fuertes y democráticas... se dirigen entonces a los gobiernos o a las instituciones internacionales, con el objetivo de convencerlos de la necesidad de impulsar políticas distintas, de renegociar capítulos de tratados internacionales o de resolver casos de contaminación industrial.*²³

De acuerdo con Bobes,²⁴ la sociedad civil refiere a una organización de voluntades que están fuera del Estado y del mercado, como las principales esferas de organización de las sociedades modernas. Este concepto incluye, pero no es lo mismo que el de ciudadanía. Los ciudadanos también pueden manifestar desacuerdos y pedir cambios, pero la sociedad civil implica la unión de los individuos por voluntad propia y por el principio de solidaridad; mientras la ciudadanía opera bajo la premisa de sus derechos políticos. Aunque es evidente que la ciudadanía se activa mediante estas asociaciones voluntarias de la sociedad civil, y estas OSC se forman por individuos que son ciudadanos.

En este contexto, la organización de la sociedad civil representa pues, una forma de acción colectiva pacífica, constante, que busca influir o modificar los espacios públicos e institucionales, los medios de comunicación, las instituciones políticas, el sistema legal y los gobiernos,²⁵ sin reivindicar cambios radiales, más bien, actuando por cambios paulatinos en la mayoría de los casos e insertando cambios a nivel individual.²⁶

Movimientos por la vejez y el envejecimiento en el mundo y América Latina

El interés social y político por los procesos de envejecimiento y la vejez en el mundo ha dado lugar a movimientos sociales institucionalizados en Organizaciones y Asociaciones de la Sociedad Civil casi desde sus inicios. Por dicha razón, hemos optado



por analizar esta forma de acción colectiva, sin dejar de reconocer las expresiones espontáneas y de protesta social en las calles, en las que también pueden participar las OSC. La primera condición que dio visibilidad a las personas mayores y a la vejez fue la pauperización y las malas condiciones económicas derivadas de las reformas a los sistemas de pensiones y el agotamiento del Estado de bienestar.²⁷ Los jubilados de muchas partes del mundo salieron a las calles a exigir a sus gobiernos pensiones suficientes para vivir dignamente y sistemas de salud adecuados a sus necesidades. Una condición que no ha cambiado con el paso de los años, pues miles de jubilados y pensionados se manifestaron apenas en enero de 2018 en diversas ciudades de España, con motivo del poco poder adquisitivo que tienen sus pensiones, un país que tiene varios años viviendo estas movilizaciones con participación de la sociedad civil, los sindicatos y grupos espontáneos de jubilados.²⁸ Baste ver que diversos expertos en los estudios de la vejez y el envejecimiento comenzaron señalando las dificultades de la etapa de la vejez en cuanto a sus malas condiciones económicas, dando por resultado una vejez poco digna y más pobre²⁹ y colocando a las personas mayores como un grupo vulnerable que requiere atención prioritaria.³⁰

Pero además de las pensiones y condiciones económicas, el paso del tiempo ha puesto de manifiesto otras necesidades de la vejez y de las personas mayores. Expresiones colectivas de la sociedad civil organizada se han movilizado para promover el respeto a las personas mayores y a su posición social como sujetos relevantes y útiles en las sociedades modernas.³¹ Tanto por la búsqueda de mejores condiciones económicas o de tipo social y cultural, las organizaciones de la sociedad civil se han ido aglutinando en torno a derechos de vivienda, derechos económicos, derechos a la salud, derechos de cuidados, derecho a la muerte digna, entre otros. A nivel internacional, organizaciones de la sociedad civil como Human Rights Watch,³² HelpAge International³³ y Aged Platform Europe³⁴ han desarrollado una gran labor de posicionamiento del tema del envejecimiento, necesidades y derechos prioritarios, han presionado a los gobiernos nacionales y colaborado directamente con organismos internacionales como la ONU, la CEPAL, CELADE y el PNUD, para tomar cartas en el asunto de los derechos y las condiciones de salud e ingresos de las personas de edad, así como apoyado al desarrollo de políticas y programas públicos en diversos países.

En América Latina, varios países cuentan con organizaciones civiles de carácter nacional, como la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Chile,³⁵ la Red de Adultos Mayores de Uruguay³⁶ y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de



Jubilados y Pensionados de la República de la Argentina.³⁷ En México, algunos sindicatos de jubilados de los gobiernos estatales y nacional, se han manifestado en contra de la reducción de sus pensiones o la pérdida de su poder adquisitivo (IMSS, ISSSTE³⁸).

Demandas sociales y acciones gubernamentales a nivel internacional y regional

En esta sección se describen algunos de los esfuerzos formales presentados por las organizaciones de la sociedad civil en la ONU, a través de la discusión plasmada en documentos que buscan el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, para ver los saldos, así como la actual agenda de las demandas sociales de las organizaciones de la sociedad civil que colocan en la agenda internacional la discusión y propugnan el reconocimiento de los derechos de las personas mayores en el siglo XXI.

Como sugiere Huenchuan, las iniciativas en el ámbito internacional referentes a los derechos de las personas mayores en el seno de la ONU, presentadas formalmente y discutidas como documentos, han sido variadas. La primera iniciativa fue presentada por Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA por sus siglas en inglés) presentada como el documento A/C.3/213/Rev. 1 el 4 de diciembre de 1948. El documento “consideraba los derechos de asistencia, la acomodación, los alimentos, el vestido, la salud física y mental, la salud moral, la recreación, el trabajo, la estabilidad y el respeto”. En ese entonces, la Asamblea, con la resolución A/RES/213 (III) sobre la Declaración de los Derechos de la Vejez, decide comunicar el borrador de la Declaración al Consejo Económico y Social (ECOSOC) y le encomienda realizar un reporte que sería sometido en la UNGA en posteriores sesiones.³⁹ Este primer esfuerzo se diluyó por los contratiempos entre las diversas entidades encargadas de realizar el reporte y el tema no se volvió a retomar hasta varias décadas posteriores.⁴⁰

El segundo esfuerzo de iniciativa se desarrolla en la década del noventa, a partir de la publicación en 1990 de la Declaración Internacional de la Vejez sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, Federación Internacional de la Vejez (IFA, por sus siglas en inglés) y, posteriormente presentada por IFA y la República Dominicana en la UNGA en 1991 (<<https://www.ifa-fiv.org/about/>>). La Declaración de IFA emite una consideración en su preámbulo, sobre la necesidad de brindar oportunidades para que las personas mayores participen normalmente en las actividades de la sociedad y contribuyan en ellas, “siempre que estén dispuestas y sean capaces de hacerlo”, destacando que “los derechos humanos fundamentales no disminuyen con la edad y convencidas de que, en razón de la marginalización y los



impedimentos que la vejez pueda traer consigo, las personas de edad corren peligro de perder sus derechos y de ser rechazadas por la sociedad a menos que estos derechos se reafirmen y respeten".⁴¹ La Declaración de 1990 propuesta por IFA constituyó la base de los Principios de las Naciones Unidas de las Personas de Edad adoptada en el seno de UNGA en la resolución A/RES/46/91³⁹ el 16 de diciembre de 1991. Si bien, los Principios tomaron en cuenta los veinte derechos sobre la vejez y diez responsabilidades de la Declaración de 1990, y fueron considerados un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las personas mayores a nivel internacional, como sugiere Huenchuan, la principal diferencia entre la Declaración y los Principios, que no es un asunto menor, es que "la primera promovía una declaración de los derechos humanos, y los Principios constituyen una exposición de aspiraciones, y con ello se reduce su alcance y contenido".⁴²

El tercero y cuarto esfuerzo de iniciativas se realizan durante 1999. Primero, la Declaración de interdependencia, presentada por la República Dominicana a la Comisión de Desarrollo Social, y la segunda por la AARP que puso a consideración de la ONU la Carta por Una Sociedad para todas las Edades.⁴³ Ninguna de ellas prosperó.

Las cuatro iniciativas anteriormente mencionadas nos permiten ejemplificar los intentos que se han discutido en el ámbito internacional referentes a los derechos de las personas mayores que han tenido avances significativos, pero aún insuficientes, por lo que se ha seguido avanzando en el tema, acompañado de otros instrumentos como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.⁴⁵ En específico, los derechos de las mujeres de edad se encuentran en la Recomendación General No. 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos en 2008,⁴⁶ El Plan de Acción Internacional de Viena sobre Envejecimiento de 1982,⁴⁷ la Proclamación sobre el Envejecimiento de 1992⁴⁸ y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento de 2002.⁴⁹ El Plan de Acción Internacional de Viena es considerado el primer instrumento internacional sobre el tema conteniendo 62 recomendaciones para la formulación de políticas públicas y programas para el envejecimiento. Fue aprobado por UNGA el 3 de diciembre de 1982. En 2010, la Asamblea General de la ONU creó el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento (The Open-Ended Working Group on Ageing), encargado de "examinar el marco internacional de los derechos humanos de las personas de edad e identificar las posibles lagunas y la mejor manera de abordarlas, así como evaluar la viabilidad de otros instrumentos y medidas".⁵⁰



A pesar de todos los esfuerzos realizados hasta la fecha, los derechos de las personas mayores no han sido reconocidos en una convención o tratado en específico con alcance internacional, como es el caso de otros grupos vulnerables, en el seno de las Naciones Unidas.⁵¹ Sin embargo, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) pueden considerarse un referente de avanzada ya que el 15 de junio del 2015, en Washington D.C. se firmó la *Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores*.⁵² Un documento que conjunta derechos sociales, económicos, políticos y de salud sin precedentes en el mundo, que buscan otorgar seguridad social, respeto y dignidad a las personas mayores de la región. En su presentación, este documento reconoce la necesidad de abordar la vejez y el envejecimiento desde la perspectiva de los derechos humanos, reconociendo que las personas mayores "deben tener una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades".⁵³

Estas organizaciones de la sociedad civil con influencia y alcance global, que han dejado de posicionar, evidenciar y estudiar las condiciones de la vejez y los derechos de las personas mayores. Las OSC cada vez están más y mejor organizadas, tal como lo sugiere Paul, "(el) movimiento social de las personas mayores a nivel mundial ha ido cobrando fuerza progresivamente y consolidando sus modos de acción (...), se da cuenta de la capacidad de presión que puede lograr mediante la participación activa y mancomunada en la esfera pública a través de la acción política en sus diversas formas."⁵⁴ De ahí que están surgiendo diversas organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo con el mismo objetivo, el cual no es sólo que cada país garantice el cumplimiento de los documentos que se han firmado a nivel internacional, ya sea presionando para su ratificación o por el pleno cumplimiento de los mismos, sino por una nueva convención internacional que aglutine más países.

Aquí resulta importante señalar la participación de las OSC —como IFA y la Alianza Global para los Derechos de las Personas Mayores— en el posicionamiento en la agenda internacional de los derechos de las personas mayores y su impacto e influencia en organismos internacionales.

La Federación Internacional de la Vejez (IFA), de acuerdo con su página web, es "una organización internacional no gubernamental con una base de miembros compuesta por gobiernos, ONG, académicos, industria privada e individuos en 70 países en el mundo". Fundada en 1973, es de destacarse que la IFA tiene estatus consultivo general en las



Naciones Unidas y sus agencias, y mantiene relaciones formales con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ha participado en la redacción de iniciativas clave como los Principios de la ONU para Personas Mayores, aboga por que las personas mayores sean reconocidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y mantiene presencia en el diálogo a nivel internacional sobre cómo proteger mejor los derechos de las personas mayores. Su objetivo central es “ser el punto de conexión global para los expertos que trabajan para influir en las políticas relacionadas con la edad”.⁵⁵ Otras iniciativas clave a nivel internacional a las que ha contribuido la IFA es en la Declaración de Montreal y en la Encuesta Global sobre la efectividad de los Principios de las Naciones Unidas para las Personas Mayores”.⁵⁶

Tanto IFA como AARP, junto con otras OSC, forman parte de la Alianza Global para los Derechos de las Personas Mayores (Global Alliance for the Rights of Older People, GAROP⁵⁷). Establecida desde 2011, la Alianza Global nace “de la necesidad de fortalecer los derechos y la voz de las personas mayores en todo el mundo”. Está integrada por nueve OSC, cada una de ellas con fuerte activismo a nivel internacional: Global Action on Ageing, AARP, Age UK, HelpAge International, la International Association of Geriatrics and Gerontology, el International Longevity Center, la International Network for the Prevention of Elder Abuse, la International Federation on Ageing y la International Association of Homes and Services for the Ageing.⁵⁸ En el siguiente cuadro se presenta un resumen de algunos objetivos de estas organizaciones y su presencia en el mundo.

Anexo 1 tabla 1

De acuerdo con su página web oficial, la misión de Alianza Global es “apoyar y mejorar la participación de la sociedad civil con los Estados Miembros, las instituciones nacionales de derechos humanos a nivel regional e internacional en torno a una convención sobre los derechos de las personas de edad”⁵⁹ En este sentido, la GAROP tiene presencia en la ONU, ya sea en sus diversas instituciones, comisiones y en la UNGA. También es un activo participante en la creación de instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos para las personas mayores. A este respecto, es un activo defensor de una nueva Convención sobre los derechos de las personas mayores con un único instrumento internacional. Las principales razones que argumentan a este propósito son⁶⁰

- *Proporcionar una posición definitiva y universal de que la discriminación por edad es moral y legalmente inaceptable.*



- *Proporcionar protección legalmente vinculante con los mecanismos de rendición de cuentas que lo acompañan.*
- *Proporcionar claridad para los titulares de deberes y titulares de derechos sobre cuáles son sus derechos y responsabilidades hacia las personas mayores.*
- *Reunir los estándares de derechos existentes que actualmente están dispersos en varios instrumentos y documentos internacionales.*
- *Compensar el actual enfoque desequilibrado en los derechos económicos y sociales de las personas mayores al incorporar todos los derechos indivisibles en un solo instrumento.*
- *Poner la discriminación por edad y los derechos de las personas mayores de manera prioritaria en las agendas de los gobiernos, los donantes y las ONG.*
- *Llamar la atención sobre como profundizar en la comprensión y en la reparación para las complejas y múltiples formas de discriminación que experimentan hombres y mujeres mayores.*
- *Proporcionar un marco para orientar las respuestas políticas al envejecimiento demográfico basado en los derechos, la equidad y la justicia social.*
- *Proporcionar una poderosa herramienta de defensa y educación para las personas mayores y aquellos que los representan en el reclamo de sus derechos.*
- *Fomentar un cambio de paradigma de las personas mayores que se consideran receptores de bienestar a personas mayores como titulares de derechos con responsabilidades.*

Una preocupación adicional de las OSC es que los derechos de la vejez no se incluyeron en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), por lo que OSC como HelAge International,⁶¹ IFA y GAROP hicieron patente dicha omisión y visibilizaron la importancia de que el envejecimiento se incluyera en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien en los ODS no hay un objetivo específico en relación con los adultos mayores, en esta ocasión están incorporados o se hace mención a sus derechos dentro de los 17 objetivos que la componen⁶² específicamente, sólo se mencionan a las personas mayores en la meta 2.2 y 11.7:

Consideraciones finales

El objetivo de este capítulo fue describir y analizar las principales demandas de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales en torno a la vejez



y el envejecimiento, para demostrar su importancia como tema público que moviliza a la sociedad y presiona a los organismos internacionales ubicándolos dentro de las perspectivas teóricas de los nuevos movimientos sociales.

Hemos descrito que el tipo de acción colectiva que ha despertado el interés por el envejecimiento y la vejez, sus condiciones y necesidades, es a través de la sociedad civil. Una modalidad de la acción colectiva que se caracteriza por ser más organizada y formalmente aceptada por los gobiernos, que se asocia de manera horizontal con los gobiernos nacionales y los organismos internacionales. Esto significa que sus principales acciones no consisten en protestas espontáneas, subversivas o violentas, y que busquen el cambio de un sistema político y económico, sino en movilizaciones pacíficas, organizadas que pretenden ser escuchadas por gobiernos y tomadores de decisiones para cambiar el *status quo*.

Se ha mostrado cómo las acciones de la sociedad civil organizada en el mundo han logrado posicionar y visibilizar los problemas y condiciones de las personas mayores, cuestión que no es menor, pues el posicionamiento y mantenimiento de la discusión y estudio sobre la vejez y el envejecimiento en los organismos internacionales y regionales —como la ONU y la OEA— ha sido posible gracias a la lucha organizada de la sociedad civil, en latitudes internacionales y nacionales. Aunado a ello, se observan limitaciones en el alcance de los objetivos e influencia de estas OSC, pues su papel en el campo de la política se contrapone con la diferenciación que busca hacer con el Estado y el poder político tradicional, lo que impide una influencia más directa.

Las principales demandas de estas organizaciones en un primer momento han versado en la mejora de las condiciones económicas, de servicios de salud, de ingresos económicos dignos, de una pensión suficiente. Demandas que no se han eliminado, sino más bien enriquecido con la visión de que lo que se debe lograr es la determinación y respeto de los derechos de las personas mayores de cualquier país. Con estas luchas y el tratamiento internacional de la temática, se ha logrado posicionar el tema en los países, las leyes y visiones del gobierno, aunque el alcance en las acciones públicas que modifican las vidas de las personas mayores es más limitado, y en él influyen otro tipo de organizaciones e instituciones de carácter local o nacional que no han sido objeto de este documento. Además del carácter de las demandas sociales de la vejez, es destacable que las OSC y personas participantes no son únicamente mayores de 60 años, sino que también se trata de un movimiento de personas que aún no son personas mayores.



A pesar de su influencia en la temática y posicionamiento en los organismos internacionales, el alcance de estas OSC dentro de los gobiernos nacionales y directamente en las personas mayores, es más limitado, sus objetivos se confinan a formar puntos de enlace y reunión, analizar y presentar documentos y posicionamientos internacionales, con miras en las políticas públicas, que no necesariamente inciden de forma inmediata en la vida de las personas mayores.

El alcance de estos movimientos se observa en la Primera Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores firmada en 2015 por los miembros de la OEA, y que consiste en una serie de garantías a la dignidad económica, política, social, cultural y de esparcimiento en la vejez. Entre estas destacan derechos de cuidados de la salud física pero también mental, derecho a la alimentación y vivienda, pero también a un sistema de cuidados paliativos adecuados para esta etapa de la vida; derecho a una muerte digna y a elegir la forma de vida y compañía que se quiere tener el proceso de envejecimiento. Estos instrumentos internacionales resultan de carácter obligatorio cuando los países firmantes ratifican su adhesión a esta convención, razón por la cual son tan relevantes, pues son la única forma de hacer que los derechos de poblaciones vulnerables como las personas mayores puedan ser medianamente respetados y obligadamente resguardados por los gobiernos de los ámbitos nacional y estatal. Así que, a tres años de la firma de esta Convención Interamericana, aún hace falta el verdadero compromiso de los gobiernos nacionales que lleve a su vez a la creación y firma de una Convención Mundial de los Derechos de las Personas Mayores, donde todos los países estén obligados a hacer cumplir los derechos de las personas mayores. Sin duda, como en el caso de muchos otros derechos, la aplicación de los mismos depende de las variables internas de cada país, lo que dificulta el logro de una vida plena y digna para las personas mayores, aunque nos acerca más a él. En ese sentido, el papel de la sociedad civil y académica de cada país toma mayor relevancia y puede ser el punto de presión para la toma de decisiones gubernamentales, como se ha visto que sucede en el ámbito de los organismos internacionales.



Anexo

Organizaciones por la defensa de los derechos de la vejez		
OSC	Objetivos	Presencia en el mundo
AARP, fundada en 1958	Es una asociación no partidista, sin fines de lucro, que ayuda a las personas mayores de 50 años a mejorar su calidad de vida. Entre sus principales objetivos se encuentra promover que los adultos mayores lleven vidas independientes, dignas y con un propósito; mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y motivar a los adultos mayores a servir, no ser servido.	Oficinas centrales: Estados Unidos Proporciona información, investigación y defensa en inglés y español.
HelpAge International, fundada en 1983	Su misión es apoyar a las personas mayores para que reclamen sus derechos, se enfrenten a la discriminación y superen la pobreza y así puedan vivir de manera segura, digna, activa y saludable. Su rol es trabajar con mujeres y hombres mayores, en los países de ingresos bajos y medios, para mejorar los servicios y las políticas, así como cambiar los comportamientos y actitudes negativos de la sociedad hacia la vejez	Se estableció en 1983 con cinco organizaciones en Canadá, Colombia, India, Kenia y el Reino Unido. Actualmente está formada por organizaciones afiliadas en 85 países. La oficina central se encuentra en Londres, además de cinco centros regionales y oficinas en África, Asia Europa así como un Secretariado Regional para América Latina y el Caribe.
International Association of Geriatrics and Gerontology, fundada en 1950	Su misión es promover la investigación gerontológica y capacitación con altos estándares en todo el mundo, e interactuar con otras organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales en la promoción de intereses gerontológicos a nivel mundial.	Oficinas centrales: Estados Unidos International Association of Geriatrics and Gerontology está conformada por 73 organizaciones miembro en más de 85 países en todo el mundo con una membresía combinada de más de 45.100 profesionales. Además de su presencia en distintas partes del mundo, International Association of Geriatrics and Gerontology tiene un mandato en la Asamblea General de Naciones Unidas, el igual que en el Consejo Económico y Social y la Organización Mundial de la Salud.
The International Longevity Centre Global Alliance (ILC Global Alliance), fundada en 1990	Es un consorcio internacional de organizaciones. Su misión es ayudar a las sociedades a comprender la longevidad y el envejecimiento de la población de manera positiva y productiva, por lo general utilizando un enfoque de curso de vida, destacando la productividad de las personas mayores y las contribuciones a la familia y la sociedad en general. Las organizaciones miembros llevan a cabo la misión mediante el desarrollo de ideas, la realización de investigaciones y la creación de foros para el debate y la acción, en los que las personas mayores son actores clave. Las prioridades de los centros son: (1) Identificar el envejecimiento productivo como un tema importante, no sólo el empleo remunerado, sino también el talento y las contribuciones continuas de las personas mayores; y (2) Promover iniciativas educativas, de investigación y políticas que promuevan una vida activa y saludable.	Oficinas centrales: Estados Unidos Centros miembros en: Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, Francia, República Dominicana, India, Sudáfrica, Argentina, Países Bajos, Israel, Singapur, República Checa, Brasil, China, Alemania, Australia y Canadá. Estos centros funcionan, tanto de manera autónoma como en colaboración, para estudiar cómo la mayor esperanza de vida y la mayor proporción de personas mayores tienen un impacto en las naciones de todo el mundo.

<p>International Federation on Ageing, fundada en 1973</p>	<p>Su misión es ser el punto de conexión global para los expertos que trabajan en influir en las políticas relacionadas con la edad.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movilizar y aprovechar la energía y la experiencia de los miembros en todo el mundo. - Crear nuevas redes y fortalecer las conexiones actuales. - Colaborar con socios en todos los sectores y disciplinas. - Influir en las políticas relacionadas con la edad para mejorar las vidas de las personas mayores. 	<p>Oficinas centrales: Canadá Compuesta por gobiernos, ONG's, académicos, empresas e individuos en 70 países.</p> <p>Además de su presencia en distintas partes del mundo. IFA tiene presencia en los siguientes OI como miembros consultivos y/o representantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consejo Económico y Social - Organización Mundial de la Salud - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Organización Internacional del Trabajo - Consejo de Europa - Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas - Representación en United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
<p>Global Ageing Network (International Association of Homes and Services for the Aging), fundada en 1994</p>	<p>Su misión es conectar y apoyar a los proveedores de servicios y atención en todo el mundo para mejorar la calidad de vida para el envejecimiento.</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promover servicios de calidad para el envejecimiento. - Conectar investigadores y proveedores. - Proporcionar un foro para la creación de redes profesionales e intercambio de información para todas las personas interesadas en el envejecimiento, el cuidado del envejecimiento, el diseño y la accesibilidad para el envejecimiento. - Promover y proporcionar educación y capacitación sobre cuestiones globales relacionadas con el envejecimiento. - Difundir información pertinente y oportuna con respecto al envejecimiento. 	<p>Oficinas centrales: Estados Unidos Compuesto por capítulos y afiliados que son membresías de organizaciones nacionales o regionales las cuales representan a los miembros en su país o región en particular. Actualmente se componen por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LeadingAge (Estados Unidos) - International Association of Homes and Services for the Ageing-China - European Association of Homes and Services for the Ageing (EU) - Ontario Long Term Care Association (Canadá) - South Africa Care Forum - Lebanon Interfaith Care Forum - National Care Forum (UK) - Malawi Network of Elderly Persons Organisations - Community Development Volunteers for Technical Assistance - Geriatric Respite Care Foundation – Uganda - LeadingAge Services Australia

Fuente: Páginas web oficiales de cada OSC. Global Ageing Network, disponible en <http://globalageing.org/mission/>. International Federation on Ageing, disponible en



<<https://www.ifa-fiv.org/about/>>. International Longevity Center, disponible en <<http://www.ilc-alliance.org/>>. International Association of Geriatrics and Gerontology, disponible en <<https://www.iagg.info/organization>>. HelpAge International, disponible en <<http://www.helpagela.org/quienes-somos/>>. AARP, disponible en <<https://www.aarp.org/espanol/conoce-aarp/que-nos-motiva/?intcmp=ESPED-CONOCEAARP-ES>>

Notas

¹ Ponencia presentada en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) Perú 2019 “Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización de vida”, Lima, Perú, del 1 al 6 de diciembre de 2019.

² Doctora en Ciencias Sociales por la FLACSO-México. Profesora investigadora de T.C. en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Agradece al Programa de Becas Posdoctorales UNAM, becaria del Instituto de Investigaciones Sociales por el apoyo para la realización de esta investigación.

³ Doctora en Ciencias Sociales por la FLACSO-México. Profesor Asociado de T.C. en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

⁴ ONU (2017), Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en <http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf>, consultado el 17 de mayo de 2018.

⁵ Anderson Gerard y Sotir Peter (2011), “Population aging: a comparison among industrialized countries”, en: *Health Affairs*, núm. 4, p. 192.

⁶ Estimaciones de la ONU. Asuntos que importan, disponible en: <<https://bit.ly/3nhFgCH>>.

⁷ Se entiende por envejecimiento poblacional como el aumento del número y proporción de las personas mayores de 60 años. Producto del cambio demográfico en tres variables: fecundidad, mortalidad y migración. Mientras la fecundidad y mortalidad disminuyen, se generan menos muertes y menos niños nuevos; al mismo tiempo que, si el país recibe mucha migración puede tener más personas jóvenes que retrasan el proceso de envejecimiento o viceversa. (ONU, Asuntos que importan, disponible en <<http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html>>.

⁸ Moreno, Ángel (2010), “Viejismo (Ageism) Percepciones de la población acerca de la tercera edad: estereotipos, actitudes e implicaciones sociales”, en *Poiésis, Revista Electrónica de Psicología Social*, p. 5. Lladó, Mónica y Carbajal, María (2009), “Producción de subjetividad sobre envejecimiento y vejez presente en las políticas



públicas”, en *MIDES*, Hacia un Uruguay más equitativo, Primer Debate Nacional sobre políticas sociales, envejecimiento y territorio p. 107.

⁹ Millares, Ivana (2010), “El Reconocimiento de las personas mayores como un recurso indispensable en la sociedad”, en *Kairos Revista de Temas Sociales*, núm. 26, pp. 9.

¹⁰ Melucci, Alberto (1994), “¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales?” en Gusfield, Joseph y Laraña, Enrique, *Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad*, Centro de Investigaciones Sociológicas, p. 121; Bobes, Cecilia (2002), “Movimientos sociales y sociedad civil: una mirada desde América Latina”, en *Estudios Sociológicos*, núm. 59, p. 375.

¹¹ Entendemos desde la teoría social, que los movimientos sociales consisten en una forma de acción colectiva, que no es la única, y que puede incluir diversas formas de movilización.

¹² Touraine, Alain (2006), “Los movimientos sociales”, en *Revista Colombiana de Sociología*, núm. 27, p. 256.

¹³ Hacemos referencia a una cuestión fundamental en la sociología clásica, que son los comportamientos sociales que salen de lo normal, desarrollados por Durkheim en dos de sus más grandes obras, *El Suicidio* y *La División Social del Trabajo*.

¹⁴ Melucci, Alberto (1988), “Las teorías de los movimientos sociales”, en *Estudios Políticos*, UNAM, vol. 5, núm. 2, p. 68.

¹⁵ Se llamó así a diversos movimientos que se fueron unificando en la lucha por una globalización y neoliberalismo diferente, que no significara la pauperización y baja calidad de vida. Ver más en Sánchez, Tania (2004), “El movimiento social altermundista: la nueva praxis de la acción política”, en *El Cotidiano*, vol. 20, núm. 126, p. 2.

¹⁶ Offe, Claus (1985), “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics”, en *Social Research*, núm. 52 (4), pp. 817-868.

¹⁷ Pleyers, Geoffrey (2015), “Volverse actor: dos vías para los movimientos sociales en el siglo XXI”, en *Revista de Estudios Sociales*, núm. 54, octubre, p. 181.

¹⁸ *Op. cit.*

¹⁹ Pleyers, Geoffrey (2018), *Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas*, CLACSO, Buenos Aires, p. 49.

²⁰ Pleyers (2015), *Ibid*, p. 182 y Pleyers (2018), *Ibid*, p. 57.

²¹ Vargas, José G. (2003), “Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y los nuevos movimientos sociales en las nuevas formas de gobernabilidad en Latinoamérica”, en *Espacio Abierto*, vol. 2, núm. 4, p. 526.

²² *Ibidem.*



²³ *Ibid*, p. 49.

²⁴ *Ibid*, p. 372.

²⁵ Cohen, Jean y Arato, Andrew (2001), *Sociedad civil y teoría política*, FCE, México.

²⁶ *Op. cit.*

²⁷ Mesa Lago, Carmelo (2004), *Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de seguridad social*, CEPAL- German Agency for Technical Cooperation (GTZ), p. 137.

²⁸ La Jornada (2018), “Revolución de Jubilados en España”, disponible en: <<https://bit.ly/3rYwwoe>>, consultado el 14 de julio de 2018.

²⁹ Del Popolo, Fabiana (2001), *Características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas de edad en América Latina*, CELADE-FNUAP, CEPAL, Chile.

³⁰ Huenchuan, Sandra y Guzmán, José (2007), “Seguridad económica y pobreza en la vejez: tensiones, expresiones y desafíos para el diseño de políticas”, en *Notas de Población*, año 33, núm. 83, p. 1.

³¹ Robles, Leticia (2006), “La vejez: nuevos actores, relaciones sociales y demandas políticas”, en *Relaciones*, núm. 105, pp. 141-174.

³² Puede consultar su página web en: <<https://www.hrw.org/es>>.

³³ Puede consultar su página web en: <<http://www.helpage.org/>>.

³⁴ Puede consultar su página web en: <<http://www.age-platform.eu/>>.

³⁵ Creada el de 8 de noviembre de 2012, participa en las actividades y proyectos para la formulación de las políticas públicas de Chile. Entre sus principales objetivos se encuentra: 1. mejorar la condición y calidad de vida de las personas mayores; 2. solicitar la creación de un Ministerio del Adulto Mayor en Chile; 3. La promulgación de una Ley, que contenga y regule el Marco Jurídico del Sector, y 4. una Organización Nacional de Adultos Mayores, que sea la voz representativa. De esta forma se pretende la obtención de múltiples necesidades de las personas mayores. Véase <<https://bit.ly/3b5l1FM>>.

³⁶ De acuerdo con la página del Ministerio de Desarrollo Social de la República del Uruguay, la Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores (REDAM) es “la unión de organizaciones de todo el país, con características heterogéneas (agrupaciones de mayores, clubes de abuelos, asociaciones de jubilados y pensionistas, Uni-3, hogares de ancianos, organizaciones de mujeres, entre varias otras) enfocadas a las personas mayores. Para facilitar el proceso de intercambio están organizadas en red. Cada una de esas organizaciones forma en la REDAM, un colectivo empoderado, esto es, un grupo capaz de tomar posición para reclamar sus derechos. Es así que funciona como



un espacio de trabajo conjunto, pero donde cada organización mantiene sus propias características". Véase <<https://bit.ly/2JKUBOc>>.

³⁷ Se puede consultar su página web en <<http://mesacoordinadora.blogspot.com/>>.

³⁸ Se refiere a los dos sistemas de seguridad social en México. El primero Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), <<http://www.imss.gob.mx/pensiones>>, y, el segundo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), <<http://www.issste.gob.mx/pensiones/>>.

³⁹ Véase, "Resolución UNGA 213(III) sobre la Declaración de los Derechos de la Vejez", disponible en <[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/213\(III\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/213(III))>.

⁴⁰ Huenchuan, Sandra (2013), *op. cit.*, p. 3.

⁴¹ Declaración internacional de la vejez sobre los derechos y responsabilidades de las personas de edad, 1990, p1

⁴² Para acceder a la Resolución Integra y los *Principios de las Naciones Unidas de las Personas de Edad* adoptados, véase <<https://bit.ly/2Mvu9Jn>>.

⁴³ Huenchuan, Sandra (2013), *op. cit.*, p. 3.

⁴⁴ *Ibid*, p. 4.

⁴⁵ El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981. Ver el contenido de la Convención Integra en: <<https://bit.ly/3rXttg3>>.

⁴⁶ En su 42º período de sesiones, celebrado del 20 de octubre al 7 de noviembre de 2008 se aprobó la Recomendación General sobre las Mujeres de Edad y la Protección de sus Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 21 de dicha Convención. "Se señalan las múltiples formas de discriminación a que se enfrentan las mujeres a medida que van envejeciendo, se explica el contenido de las obligaciones que deben asumir los Estados partes con respecto al envejecimiento con dignidad y los derechos de las mujeres de edad, y se formulan recomendaciones de política para incorporar las respuestas a las preocupaciones de las mujeres de edad en estrategias nacionales, iniciativas de desarrollo y medidas positivas, de manera que estas mujeres puedan participar plenamente en la sociedad, sin discriminación y en pie de igualdad con los hombres" (CEDAW, 2011, pp. 35-36).

⁴⁷ El cual es el resultado de la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en Viena, Austria del 26 de julio al 6 de agosto de 1982 (ver documento:



<http://www.monitoringris.org/documents/norm_glob/vipaa.pdf>, El Plan de Acción Internacional fue aprobado por UNGA el 3 de diciembre de 1982 en la A/RES/37/51. Ver Resolución en <<https://bit.ly/2KVxph3>>.

⁴⁸ La Proclamación sobre el envejecimiento sustentada en la resolución de UNGA A/RES/47/5 del 16 de octubre de 1992 forma parte de los resultados de la Conferencia Internacional del Envejecimiento en ocasión del décimo aniversario del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Ver Resolución en <<https://bit.ly/38gUrYA>>.

⁴⁹ El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento es el resultado de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Madrid del 8 al 12 de abril de 2002, de conformidad con la Resolución A/RES/54/262 de UNGA del 25 de mayo de 2000 (Ver: <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/262>).

⁵⁰ Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Para ver información sobre este grupo de trabajo, véase <<https://social.un.org/ageing-working-group/>>.

⁵¹ Es el caso de las mujeres, personas con discapacidad o niños.

⁵² De los países firmantes de la Convención sólo la han ratificado y depositado a la Secretaría General de la OEA: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Uruguay. Los países que firmaron, pero aún no han la ratificado son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. El Salvador presentó el instrumento de adhesión a la Convención el 18 de abril de 2018. Véase <<https://bit.ly/2LkxtGW>>.

⁵³ *Idem*.

⁵⁴ Paul, Susanne (2012), "El movimiento de las personas mayores: emergencia y demandas", en Sandra Huenchuan (editora) *Los derechos de las personas mayores en el siglo XXI: situación, experiencias y desafíos*, CEPAL, pp. 373.

⁵⁵ Véase, <<https://www.ifa-fiv.org/about/>>.

⁵⁶ Véase, <<https://www.ifa-fiv.org/about/>>.

⁵⁷ La página web de la Alianza Global puede consultarse en: <<http://www.rightsofpeople.org/>>

⁵⁸ Véase, <<http://www.rightsofpeople.org/>>

⁵⁹ Véase <<http://www.rightsofpeople.org/>>.



⁶⁰ Traducción propia en base en la sección de su página web “¿Por qué necesitamos una Convención de personas mayores?”, disponible en <<https://bit.ly/395gh06>>.

⁶¹ HelpAge International sugirió las siguientes recomendaciones “para el proceso de post-2015 a fin de responder al desafío del envejecimiento global: (1) Las oportunidades y desafíos del envejecimiento mundial deben ser considerados temas centrales en la agenda post 2015; (2) Las políticas de promoción hacia un envejecimiento demográfico activo, seguro y saludable deben ser apoyadas y deben verse reflejadas en el marco de desarrollo de los resultados post-2015; (3) Los mecanismos nacionales de protección social para los más pobres y vulnerables, como las pensiones no contributivas así como la inversión en los sistemas de atención primaria de salud constituyen la clave para luchar contra la pobreza y proteger a las personas mayores”. Véase, página de HelpAge International, disponible en <<https://bit.ly/3hMDJn2>>.

⁶² Para una consulta de los Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y las 169 metas que le componen. Véase, ONU: <<https://bit.ly/3ogg6FO>>.

Bibliografía

Anderson, Gerard y Sotir, Peter (2011), “Population aging: a comparison among industrialized countries”, en *Health Affairs*, núm. 4, pp. 191-203.

Bobes, Cecilia (2002), “Movimientos sociales y sociedad civil: una mirada desde América Latina”, en *Estudios Sociológicos*, núm. 59, pp. 371-386.

CEDAW (2011), “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, disponible en <<https://bit.ly/35a7Q2q>>.

Cohen, Jean y Arato, Andrew (2001), *Sociedad Civil y Teoría Política*, FCE, México, 703 pp.

Courtis, Christian (2017), “Las personas mayores y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: oportunidades y desafíos”, en *Boletín Envejecimiento y Desarrollo*, núm. 14-15, disponible en <<https://bit.ly/2Xa0RCg>>.

Del Popolo, Fabiana (2001), *Características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas de edad en América Latina*, CELADE-FNUAP, CEPAL, Santiago de Chile, 83 pp.

De Sousa Santos, Boaventura (2001), “Los nuevos movimientos sociales”, en *Debates Revista OSAL (Observatorio Social de América Latina)*, CLACSO, núm. 5, pp. 177-184.

Huenchuan, Sandra y Guzmán, José (2007), “Seguridad económica y pobreza en la vejez: tensiones, expresiones y desafíos para el diseño de políticas”, en *Notas de Población*, año 33, núm. 83, pp. 1-23.



- Huenchuan, Sandra (2013), *Los derechos de las personas mayores, Módulo 2, Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional*, CEPAL, Chile, pp. 1- 25.
- Huenchuan, Sandra y Rodríguez Piñero, Luis (2010), *Envejecimiento y derechos humanos: situación y perspectivas de protección*, CEPAL/UNFPA/ASDI, Chile, pp. 1-144.
- Lladó, Mónica y Carbajal, María (2009), “Producción de subjetividad sobre envejecimiento y vejez presente en las políticas públicas”, en MIDES, *Hacia un Uruguay más equitativo, Primer Debate Nacional sobre Políticas Sociales, Envejecimiento y Territorio*, pp. 107-112.
- Melucci, Alberto (1994), “¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales?”, en Gusfield, Joseph y Laraña, Enrique, *Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad*, Centro de Investigaciones Sociológicas, España, pp. 119- 150.
- Melucci, Alberto (1988), “Las teorías de los movimientos sociales”, en *Estudios Políticos*, UNAM, vol. 5, núm. 2, pp. 67-77.
- Mesa Lago, Carmelo (2004), *Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de seguridad social*, CEPAL- German Agency for Technical Cooperation (GTZ), Chile, 137 pp.
- Millares, Ivana (2010), “El reconocimiento de las personas mayores como un recurso indispensable en la sociedad”, en *Kairos Revista de Temas Sociales*, núm. 26, pp. 1-14.
- Moreno, Ángel (2010), “Viejismo (*Ageism*) Percepciones de la población acerca de la tercera edad: estereotipos, actitudes e implicaciones sociales”, en *Poiésis, Revista Electrónica de Psicología Social*, Colombia, FUNLAN, pp. 1-9.
- Paul, Susanne (2012), “El movimiento de las personas mayores: emergencia y demandas”, en Sandra Huenchuan (editora), *Los derechos de las personas mayores en el siglo XXI: Situación, experiencias y desafíos*, CEPAL-CDMX, México, pp. 373-381.
- Offe, Claus (1985), “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics”, en *Social Research*, núm. 52, pp. 817-68.
- ONU (2017), “Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, disponible en <http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf>.
- Pleyers, Geoffrey (2018), *Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas*, CLACSO, Buenos Aires.
- Pleyers, Geoffrey (2015), “Volverse actor: dos vías para los movimientos sociales en el siglo XXI”, en *Revista de Estudios Sociales*, núm. 54, octubre, pp. 179-183.
- Sánchez, Tania (2004), “El movimiento social altermundista: la nueva praxis de la acción política”, en *El Cotidiano*, vol. 20, núm. 126, pp. 1-16.



Touraine, Alain (2006), “Los movimientos sociales”, en *Revista Colombiana de Sociología*, núm. 27, pp. 255-278.

Robles, Leticia (2006), “La vejez: nuevos actores, relaciones sociales y demandas políticas”, en *Relaciones*, núm. 105, pp. 141-174.

Vargas, José G. (2003), “Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y los nuevos movimientos sociales en las nuevas formas de gobernabilidad en Latinoamérica”, en *Espacio Abierto*, vol. 2, núm. 4, pp. 523-537.

Documentos de ONU y OEA

OEA (2015), “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores”, disponible en <<https://bit.ly/3ogikoE>>.

ONU (2018), “Asuntos que importan”, disponible en <<https://bit.ly/2MqdfMf>>.

ONU (1983), “Vienna International Plan of Action on Aging, Nueva York”, disponible en <http://www.monitoringris.org/documents/norm_glob/vipaa.pdf>.

Resoluciones de Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA)

UNGA (1948), “Declaración de los derechos de la vejez”, A/RES/213 (III), disponible en <[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/213\(III\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/213(III))>.

UNGA (1991), “Implementation of the International Plan of Action on Ageing and related activities and United Nations Principles for Older Persons”, A/RES /46/9, disponible en <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/91>.

UNGA (2002), “Follow-up to the International Year of Older Persons: Second World Assembly on Ageing”, A/RES/54/262, disponible en <<https://bit.ly/3hIWjw6>>.

UNGA (1992), “Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento”, A/RES/47/5, disponible en <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/5>.



El potencial democrático del derecho a la educación para los movimientos universitarios de Colombia y Chile.¹

Eliécer Soto Ardila ²

Resumen

Los movimientos estudiantiles chileno y colombiano se reconocen y son reconocidos como actores sociales que contribuyen a la democratización de sus sociedades. Sin embargo, las organizaciones que articulan estos movimientos reflejan posibles tensiones o impases en sus prácticas organizacionales y de conducción respecto a la democracia que proponen. Una de esas tensiones gira en torno al modo de comprender la democracia y su relación con la causa de la educación como derecho social y de la educación con el desarrollo inclusivo, de forma que una y otras no choquen al momento de establecer el plan de acción colectiva, para lo cual debemos responder a la doble pregunta ¿Qué es lo que entienden estos movimientos por democracia? Y ¿qué relación tienen la causa de la educación con la democracia?

A partir de entrevistas a miembros de los movimiento estudiantiles en cada país, estudiantes de base y dirigentes, análisis de declaraciones o proclamas y observación no participante de sus asambleas, desde una perspectiva cualitativa, de estudio comparado de los dos casos de Chile y Colombia, esta ponencia mostrará que en ambos movimientos la democracia es definida como estrechamente ligada a la idea de ejercer el derecho social a la educación, al mismo tiempo, mostraremos cómo esta comprensión se traduce e influye en las prácticas democráticas internas que estos movimientos promueven en sus plataformas y organizaciones.

Palabras clave

Movimientos universitarios; Democracia; Derechos sociales, Educación, Desarrollo.

Introducción

Esta ponencia, que se enmarca en los primeros avances de una investigación centrada en la relación entre la democracia interna en los movimientos sociales, con su fortalecimiento y potencialidad para constituirse en actores-sujetos sociales democratizadores, desde el análisis comparado de dos casos de movimientos universitarios en Chile y Colombia, aborda una de las varias tensiones que se dan al interior de las plataformas que articulan dichos movimientos universitarios, entre la democracia deseada y proclamada en sus discursos y las prácticas de conducción



interna. Se trata precisamente de la tensión en torno al modo de comprender la democracia y su relación con la causa de la educación como derecho social y de la educación con el desarrollo inclusivo.

La fundamentación del problema mostrará los contextos que rodean dicha tensión, un contexto marcado por la deuda social de educación de calidad, que genera masa poblacional con deficiencias en educación y cultura política. Los primeros resultados, y hallazgos, nos acercaran a las formas como internamente estos movimientos, viven el conflicto de querer asumir las prácticas democráticas que demandan a la sociedad y al Estado, en un entorno cultural y de vacíos de formación política, que les dificulta la definición y desarrollo de sus propias agendas, hasta llegar a vislumbrar, a manera de conclusiones, tanto los posibles factores que más inciden en la generación de esta tensión, como otros factores que pueden ayudar al afronte de dicha tensión y al esclarecimiento, al interior de estos movimientos, del alcance posible de la relación entre educación, derechos sociales, democracia y desarrollo y por ende, de la pertinencia de esta relación en el marco programático del movimiento mismo. En el fondo se juega el sentido de la educación como potenciador del desarrollo humano y de cultura política alter democracia, que posibilita, a los actores sociales, mejores prácticas de conducción democrática al interior de los mismos movimientos sociales.

Fundamentación del problema

Entre los múltiples movimientos sociales que, al despuntar el siglo XXI, emergieron o reemergieron en un nuevo ciclo de movilización social, entorno a la demanda de restaurar o profundizar la democracia, en varios lugares del mundo, encontramos en Suramérica, dos experiencias de movilización estudiantil universitaria, que coincidieron, en tiempo y muchas de sus características, con estos movimientos (Archila 2012; Torres y Sánchez 2019), se trata, por un lado, del movimiento estudiantil universitario de Chile, articulado desde la Confederación de Estudiantes de Chile-CONFECH, que tomó relevancia en la conducción del movimiento estudiantil por el derecho a la educación en 2011. Por otro lado, encontramos el movimiento de estudiantes de Educación superior de Colombia, articulado en 2011 por la Mesa Amplia Nacional de Educación-MANE, coincidiendo con el movimiento Chileno, por la misma causa de demanda del derecho a la educación y a la democratización y autonomía de los centros de educación superior así como al fortalecimiento de la democracia participativa en sus respectivos países.

El eco de estos dos movimientos se ha mantenido en el tiempo hasta el presente, en lo que McAdam, Tarrow y Tilly (2005) llaman “*episodios*” de movilización social; con una



diferencia entre el proceso de Chile, en el que el reconocimiento como articulador del movimiento se mantiene en la CONFECH y las Federaciones Estudiantiles Universitarias que congrega; mientras, para el caso Colombiano, la MANE se disolvió hacia 2014 y tres plataformas procuran articular el movimiento estudiantil universitario o superior: La Federación Nacional de Representantes de los Estudiantes de Educación Superior-FENARES; la Asociación Colombiana de Representantes de Estudiantes de Educación Superior- ACREES, que surge hacia el 2015 y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior-UNEES, surgida en 2018.

Sin embargo, las plataformas que articulan estos movimientos en Chile y Colombia, reflejan, en sus prácticas organizacionales y de conducción, tensiones o impases, respecto a la vivencia interna de la democracia que proponen y demandan (Vargas, V. 2017; Lopera, S; Pardo, E y Hernández, C. 2018). El alcance de las demandas de estos movimientos por la educación, como derecho social, pero también por la democracia, ha generado una de esas tensiones internas, que se palpan en los dos casos, porque en Colombia y Chile, al momento de establecer las agendas de apuestas y acción colectiva, se han dado choques, o disensos entre las organizaciones que forman parte de las plataformas estudiantiles de ambos países.

Todo lo anterior, nos trae a una pregunta fundamental: ¿Las formas como se concibe la democracia y se dan las prácticas de organización y conducción en los actuales movimientos estudiantiles de Chile y Colombia, favorecen su democracia interna y con ella, su fortalecimiento y cohesión como movimiento social? Esta pregunta, conectada a la demanda de democracia y a la apuesta por la educación, gratuita y de calidad como derecho social, nos implica resolver, entre otras, estas preguntas: ¿Cómo entienden estos movimientos la democracia?; ¿Qué relación tienen, para los universitarios de Chile y Colombia, la causa de la educación con la democracia, el desarrollo y el conjunto de los derechos humanos?

En Colombia, una de las razones o causas que llevaron a la desarticulación de la MANE, según varios activistas del movimiento universitario que participaron en ese espacio, radicó precisamente en el conflicto que se dio entre las Organizaciones que la articulaban, en torno a si el desafío estratégico de la MANE, se centraba sólo en la causa de la educación como derecho social o se extendía a otras causas que se cruzan con la democracia como el de apoyar los procesos de paz en Colombia. La polarización, llevó a que cada bloque y organizaciones se dedicaran a promover separadamente sus apuestas, y no hubo mecanismos de conducción que posibilitaran la búsqueda de



consensos para mantener la cohesión; está tensión se extiende hoy a los ya referidos espacios o plataformas ACREES y UNEES.

También en Chile se dan tensiones, en Federaciones que participan en la CONFECH y la CONFECH misma, en cuanto unos sectores consideran que se debe articular la causa de la educación, con otros tipos de causas sociales y otros consideran que el movimiento en cuanto sectorial, gremial y autónomo y debe concentrarse en el sólo derecho a la educación misma y articular, sólo en ese ámbito, con otras organizaciones sociales. Llegamos así a las preguntas que constituye la razón de esta ponencia: ¿cómo se dan las tensiones, en estos movimientos universitarios, entre el discurso de la educación para todos y con calidad, como factor de democracia y desarrollo y el asumir o integrar la educación y demás derechos sociales a las prácticas internas de conducción de sus plataformas y la definición de sus agendas y banderas de lucha?; ¿Cómo impacta esta tensión el fortalecimiento de su democracia interna y el desempeño en su acción colectiva? Y ¿Qué alternativas de afronte y procesamiento a estas tensiones o zonas grises han visualizado o implementado?

Para abordar esta problemática, asumimos las siguientes categorías como componentes teóricos conceptuales básicos.

a. El Movimiento Universitario como movimiento social.

Apoyados en el aporte de Aguilera (2014) sobre el Movimiento juvenil podemos considerar al movimiento estudiantil universitario como:

“Articulación de grupalidades con miembros de entre 17 y 29 años, universitarios, que contienen una particular visión de la sociedad, apuestan por el cambio social, reconociéndose en conflicto y disputa por la posibilidad de construir un orden alternativo, abiertos a articular, con otros sectores de la sociedad, sin diferenciación etaria y generacional”³

De la teoría de la acción de los movimientos sociales, acogemos el carácter de historicidad y de su enfoque cultural, el carácter de construcción social del movimiento y desde él, del cambio social; a lo que suma otro nivel de la acción social, que Pleyers (2006), en sintonía con Touraine denomina “político/institucional”. (p.737); pero consideramos que también los factores objetivos estructurales que forman parte del contexto histórico, están presentes, de ahí que se hace necesario acudir a los enfoques integradores. Valoramos de McAdams, Tarrow y Tilly (2005) el paso de asumir, además



de los factores objetivistas, aun fuertemente estructurales y estáticos, los factores de contexto histórico y cultural, así como los sujetos o actores colectivos.

También nos apoyamos en Pleyers (2015), quien establece la necesidad de articular dos vías de análisis y comprensión de los movimientos sociales post 2010, la vía de la razón, apoyada en análisis científicos y técnicos y otra, que él denomina de la subjetividad, en cuanto el análisis se hace desde las “experiencias vividas” (p.181) por los actores que construyen el movimiento social específico. Pleyers, como Castell (2012) destacan también la posibilidad prefigurativa o de coherencia y compromiso frente a lo que demandan a sus oponentes y la individualización del compromiso.

b. Respecto a la categoría o modo de comprender la Democracia, valoramos el sentido sustantivo moderado de democracia, como el que desarrolla Touraine (1994; 2000) que, si bien parte del reconocimiento del ejercicio del poder de los ciudadanos por medio del voto y de la importancia del sistema representativo institucional, que son los componentes de la denominada democracia minimalista y o indirecta (Touraine 2000, p.8-9), también incluye el respeto a las libertades personales con justicia y el acceso a la plenitud de derechos a todos los ciudadanos; rompiendo el reduccionismo binario entre minimalismo y democracia directa o sustantiva.

Touraine (1994, p. 319; 2000, p.17) reconoce y parte de los aportes de Bobbio (1986, pp.9-15), que destaca tres principios institucionales: las reglas que determinan la representatividad y delegación del poder para la toma de decisiones y los mecanismos de procedimiento; el condicionamiento de la democracia a una mayor cantidad de personas en la participación directa o indirecta para la toma de decisiones y que se aplique realmente el mecanismo electoral. Esperamos que la investigación nos muestre, si las plataformas estudiantiles universitarias asumen esta perspectiva en su discurso, pero sobre todo si la aplican en sus modos concretos de conducción interna, si avanzan hacia un enfoque intermedio de democracia participativa o por el contrario se ubican en uno de los extremos binarios,

c. Comprendemos la categoría de Derechos Humanos, en sintonía con la “Declaración de los derechos humanos” de la ONU (1948 [2015]) como las facultades, recursos y condiciones de vida requeridos por todos los seres humanos para desarrollar su existencia con la dignidad que le es inherente en cuanto persona humana, por tanto los derechos humanos tienen su raíz en la dignidad del hombre, con un carácter universal, para todos, mujeres y varones y son progresivos. Acogemos el sentido comunitario o social de los derechos humanos, ligado al sentido colectivo de democracia antigua,



confrontando el sentido individualista de los derechos humanos, propio del enfoque liberal de la democracia, centrado sólo en derechos individuales, como lo refiere Bobbio (1989), confrontación que incide en el sentido del derecho a la educación como derecho individual o como derecho colectivo y o social; conflicto conceptual explicitado por (Cortes y Villalobos 2018, p. 141-142).

En este marco ubicamos los Derechos Sociales, como derechos reivindicativos de las condiciones requeridas para que cada persona y o comunidad puedan vivir en condiciones dignas e integrada dentro de la sociedad donde se encuentre y pueda acceder a las básicas oportunidades de desarrollo humano integral; en el conjunto de derechos sociales encontramos el derecho a la educación.

d. Respecto al sentido de la Educación, como categoría o dimensión, apoyados en Agustín Campos (2014), articulamos los verbos latinos: *Educare*, que significa criar, nutrir, es decir nutrir con conocimientos, lo que le da un sentido pasivo al estudiante, con el verbo *educere*, que indica sacar afuera, es decir, sacar a flote las posibilidades o potencialidades de las personas que se educan; articula estos dos sentidos posibilita entender la educación como un ejercicio de dialogo de saberes y capacidades, un proceso de interacción social, que se hace progresivo, tiene como propósito el cambio y generar procesos, que estimulen el desarrollo como procesual y no sólo como conocimiento estático. Retomamos también la confrontación entre el sentido de la educación como derecho particular desde el enfoque individualista de la democracia Liberal o el sentido de bien común desde el enfoque colectivista-social de democracia antigua como la refieren cortes y Villalobos (2018) y Bobbio (1989).

e. Para la categoría Desarrollo Humano, consideramos su comprensión de manera integral, desde elementos, dados por Pablo VI (1967) en “Populorum Progressio” y por el PNUD (1995; 2011) en sus “Informes de desarrollo Humano”; podríamos decir con Pablo VI (1967) que el desarrollo es “el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas de todo el hombre y de todos los hombres”(14) por tanto, el desarrollo es crecimiento cualitativo y cuantitativo del hombre, en todas sus dimensiones y facultades. En esa línea, avanza el PNUD (1995) al considerar el desarrollo como, “la ampliación de las opciones de las que dispone el ser humano”. (P.1), pero, dándole un carácter integral, histórico, procesual, hasta incorporar los factores de “equidad... productividad... sustentabilidad... sostenibilidad” (PNUD. 2011. P.16).



Consideramos que estas maneras de comprender el desarrollo aún se quedan cortas, otras voces procuran la búsqueda de enfoques alternativos y paradigmas emergentes de desarrollo y democracia como las del foro social mundial y la “ola podemos” referido por De Sousa (2017) y que vienen reclamando los movimientos post 2011.

Metodología

La investigación se desarrolla, desde una perspectiva cualitativa, de estudio comparado de dos casos, para lo cual se aplican las técnicas de entrevista de profundidad, a miembros de los movimiento estudiantiles, 21 estudiantes por cada país, para un total de 42; observación no participante a asambleas y otras actividades de las plataformas ENEES-UNEES en Colombia y CONFECH, incluidas algunas actividades de federaciones en Chile y la consulta de documentación de fuentes de primera mano, proveniente de las mismas plataformas, primordialmente declaraciones o proclamas así como consulta a fuentes indirectas como archivos de prensa, consultas o conversación con académicos versados en el tema y estudiantes que formaron parte del proceso universitario en ambos países. Para las entrevistas en profundidad, se recurrió a un muestreo no probabilístico, de tipo bola de nieve, procurando un margen de representatividad y relevancia tanto de las fuentes como de los contenidos referidos a los distintos ámbitos, geográficos, sociales, étnicos culturales y políticos.

Las entrevistas implicaron estudiantes de 8 universidades y un Instituto Tecnológico Estatales de Colombia y de tres Universidades de Chile, de carácter Estatal; así como estudiantes de 4 universidades privadas en Colombia y de 7 universidades privadas de Chile. Geográficamente, se tomaron estudiantes de 3 universidades Regionales de Chile; estudiantes de, 7 universidades y un Instituto tecnológico, de Regiones en Colombia, así como estudiantes de 7 Universidades en Santiago de Chile y de 5 universidades en Bogotá, procurando cuidar el peso proporcional de las capitales y regiones en los dos países, el peso en volumen e incidencia de universidades de carácter estatal y privado se reflejan para ambos países. En cuanto a roles o nivel de participación, en las plataformas del movimiento estudiantil, se entrevistaron dirigentes o voceros de las plataformas, representantes a consejo superior y consejos de carrera y estudiantes de base en los dos países. Parte de ellos, vienen participando desde los procesos de la MANE y la CONFECH 2011.

Respecto a los procedimientos de análisis, se recurre a la técnica de análisis social del discurso, con algunos componentes del análisis crítico del discurso, tanto para la información recogida en las entrevistas y la observación semiestructurada, en todo lo



que de las fuentes, se pueda extraer como discurso de los movimientos estudiantiles; por tanto es importante asumir que los contextos históricos y culturales, “están siempre vinculados a otros discursos producidos con anterioridad y a aquellos que se producen sincrónicamente con posterioridad” (Fairclough y Wodak 2000: 394).

Para el análisis de las fuentes documentales, se busca triangular la información, procurando aplicar los parámetros de las entrevistas y de la observación semiestructurada. Respecto al análisis de la observación se toman en cuenta los aportes de Goffman (2012a; 2012b) en torno a considerar factores de performance en cuanto: Ubicar la acción en situación específica; establecer los escenarios; las representaciones o formas de ejercer los roles de conducción, para este caso, ubicar las tensiones que reflejan los actores entre el personaje del discurso democrático y el desempeño concreto de los individuos-actores y su manejo, así como el afronte de los estigmas impuestos a los movimientos estudiantiles.

Resultados y discusión

El discurso sobre la relación democracia-educación y demás derechos humanos y desarrollo.

Estas organizaciones y plataformas expresan en sus discursos conciencia sobre la relación educación y cultura política, la cultura política como condición para profundizar una cultura pro democracia; y la relación entre educación, cultura y democracia con el desarrollo o como factores condicionantes para el desarrollo incluyente. Respecto a la cultura política basada en el “Cómo hacer”; los dos casos, enfatizan en principios pro democracia, a saber, empatía, la transparencia y la participación, como criterios para la acción y conducción política: “la horizontalidad; transparencia y la participación y la representatividad creo que son los principales valores que podemos rescatar de la democracia” (entrevistado P.O Chile. Julio 2018) en ese mismo sentido un estudiante de Región en Colombia, afirma que, “nosotros no hablamos de valores, hablamos de principios...unos principios consensuados, por ejemplo hablamos respecto al tema de la corrupción, establecimos un principio de transparencia...” (septiembre 2018). A todo esto, entrevistados en Chile y Colombia coinciden en el requisito del factor Voluntad política.

El modo de comprender la democracia

Constatamos que, tanto para quienes participan en la CONFECH y sectores como el movimiento gremial de la U Católica de Chile, como para quienes en Colombia,



participan en la ACREES y ENEES-UNEES, a pesar de sus diferencias, hay componentes reconocidos en común para la democracia:

El reconocimiento del Estado, la sociedad civil en su amplitud y de los partidos y organizaciones políticas, como actores in excluibles de la construcción de democracia, respetando las autonomías de estos componentes, lo que implica el carácter autónomo de los movimientos estudiantiles frente a los sectores políticos y estatales. Aparecen contadas excepciones, que limitan la valoración y necesidad de la democracia, pero reflejan lo que se da en algunos sectores de la amplia sociedad: “Hay que hacer una aclaración y es que yo no creo que todo deba ser democrático tampoco, no sé qué tan buena idea es que los estudiantes voten por el rector...si todo debería ser democrático” (Representante a consejo superior de U privada en Colombia. Septiembre 2018).

Se mantienen, fracciones que enfatizan, por un lado una democracia más representativa y por otro, una más directa, pero en las plataformas, pragmáticamente han establecido mecanismos que acercan estos extremos y asumen un enfoque de democracia participativa con unos mínimos de representación a nivel de vocerías, manteniéndose estas supeditados a las asambleas.

La mayoría de los entrevistados y en las intervenciones de buen número de participantes en los espacios asamblearios observados, tanto en Colombia como en Chile, respecto a democracia, incluyen sus conceptos en los documentos a nivel de demandas y los expresan como principios; pero, algunos entrevistados, reconocen el vacío de discusión teórico conceptual sobre el tema democracia: “este debate sobre qué es democracia es algo que no se ha dado en los distintos espacios...en mi federación, en mi universidad, nunca hemos discutido lo que es democracia...porque es algo que damos por sentado.” (Estudiante Universidad Regional. 2018 Chile).

Podemos establecer los siguientes enfoques de democracia, entre los miembros de las plataformas que articulan los movimientos estudiantiles de Colombia y Chile.

Democracia marcadamente representativa, más cercana al sentido minimalista de representatividad fiduciaria, es el caso de quienes promueven la FENARES en Colombia, cercana a lo que Sartori (2007) denomina “*democracia indirecta*” (p.201); *enfoque de democracia participativa* pero con marcado acento en la representatividad, con el ejercicio del voto como elemento primordial para la toma de decisiones, que acoge el escenario asambleario; es el enfoque que promueven muchos de los miembros de la CONFECH en Chile y la ACREES en Colombia. En la mayoría de miembros de la ENEES-UNEES de Colombia, encontramos un sentido de democracia participativa, en



el que se procura la mayor vinculación directa posible de las bases (ciudadanía) y el mayor control de la sociedad o de las bases al ejercicio de sus representantes, con énfasis en los espacios asamblearios y la toma de decisiones por consensos asumiendo el voto como último recurso definitorio. La identidad en torno a los “Enjeu” o desafíos, reconoce una ecuación o relación de interdependencia entre Democracia como garante de los derechos humanos; Educación como derecho humano y base para el desarrollo humano.

ACREES se Conformar, bajo la bandera de la educación como derecho social universal y de calidad; encontramos también en las Federaciones que componen la CONFECH expresiones que marcan una similar identidad en torno a su historicidad y desafío (FEUSACH, 2015), que los compromete también a “velar por la defensa de los derechos humanos, promoviendo un sistema democrático...” (p.6).

Las practicas concretas, la democracia interna y las tensiones surgidas frente al discurso relacional democracia - derechos humanos y desarrollo

Ya habíamos referido las tensiones que se dan entre las plataformas que buscan articular el Movimiento Universitario en Colombia respecto al alcance de su desafío o apuesta por la educación, ligada a la democracia y el desarrollo; así mismo, en la CONFECH podemos notar las tensiones en torno a la articulación de causas conexas con la educación, la cultura política-democrática y el desarrollo incluyente, es el caso de la articulación con la CUT, respecto al derecho al trabajo digno de los jóvenes estudiantes; con el mismo movimiento feminista y la causa de equidad de género, así como a la inclusión y respeto a las minorías sectoriales como las etnias originarias comunes a ambos países. Para ambos casos se cruza esta tensión, con la tensión en torno a los posicionamientos de los sectores políticos, frente a la conducción del movimiento estudiantil desde el control de las plataformas que articulan el movimiento.

Con términos idénticos los siguientes son los aspectos concordantes en la visión de los dos movimientos, que inciden en el déficit de democracia en los dos países; aspectos estos que resultan vinculados o relacionados con la educación o la carencia de educación y de manera especial la educación específica en civilidad y política:

** La poca participación, por falta de educación para la misma; lo que va unido a la carencia de espacios con carácter deliberativo o vinculante y que excluye a los ciudadanos para la toma de decisiones en políticas públicas.*

** La poca representatividad, de los dignatarios elegidos por voto directo, con participación electoral que no supera el 40%, en ambos países.*



** Fue recurrente, para ambos países, la percepción en torno a que la negación de los derechos sociales y económicos a las mayorías, debilitan la democracia.*

** La corrupción en todos los niveles y sectores, curiosamente fue más recurrente en los entrevistados de Chile y la falta de transparencia, fue más destacada al abordar el déficit de democracia interna de los movimientos que en la sociedad en general.*

Por lo que expresan buen número de entrevistados, 14 de Chile, 12 de Colombia, las tensiones e impases de la democracia interna en las plataformas que articulan estos movimientos universitarios en Chile y Colombia, tienen como una de sus causas, la débil educación política, pero, a pesar de las tensiones internas, sólo hasta que actores de base se manifiestan, por vía de auto convocatorias, algunas de estas plataformas, como la CONFECH, no se plantean la necesidad de profundizar su democracia interna.

Alternativas de afronte y procesamiento a estas tensiones o zonas grises

En ambos casos, fue notoria y predominante la insistencia de los universitarios, entorno a la necesidad de la educación política desde la formación básica, como aportante a la cultura y socialización política de los jóvenes o estudiantes; ese vacío en educación incide en la maduración social y política de los Chilenos y Colombianos y por tanto, en la capacidad de construir cultura democrática y alternativas de democratización de la sociedad y de las mismas organizaciones y movimientos sociales: “los problemas que hoy día tiene el país radican en la educación... estamos frente a un sistema que, nos fue suprimiendo nuestro pensamiento crítico... nos quitó filosofía, después ¡educación cívica!...En términos reales, para que tengamos masa no pensante” (Estudiante en Concepción Chile Agosto de 2018).

Para lo anterior, podemos referir una experiencia captada en los ejercicios de observación: En el caso de Colombia, se pudo constatar que, ante propuestas de espacios de reflexión o jornadas académicas para fortalecer la formación política y social de los estudiantes, la respuesta de participación de los estudiantes es mínima, por ejemplo, a una jornada en una universidad de región en Colombia, realizada en febrero de 2019, por la UNEES, al panel apenas asistieron cerca de 250 estudiantes en una sede que cuenta con más de 15.000 .

En Colombia, el afronte de un nuevo ciclo de movilización en 2018, llevó a las tres plataformas a trabajar unidos al lado de sindicatos de profesores universitarios de un intento de “plataforma amplia por la educación”, pero conscientes de que se mantenían en sus posiciones y en la causa de la educación como el único factor transversal que los llevaba a actuar, conjuntamente, pero no cohesionados, como lo grafica el ya citado



artículo de Lopera, S et al (2018) “Los estudiantes marchan juntos pero no revueltos “. (P.1), al punto que no le han dado continuidad a esa plataforma amplia. La CONFECH, para afrontar las asperezas por el apoyo o no, a causas promovidas por otros sectores como el sindical, se establecieron criterios como el de articular con organizaciones que no contradigan en sus prácticas principios democráticos como el de la inclusión de género y no sexismo, esto porque el Frente Amplio, mayoría en CONFECH, le enrostra al PC, que direcciona a la CUT, sus posturas machistas y piden gestos de apertura democrática para articular.

Conclusiones o reflexiones finales

Las experiencias recogidas de estos movimientos universitarios, parecen dar la razón a Bobbio (1984) pues encarnan la frustración de “las falsas promesas” (p.16) de la democracia moderna, en torno a su relación con la educación del ciudadano, el aporte a la cultura política y democrática; la supresión de las oligarquías y la promoción de una sociedad pluralista, encarnadas en las prácticas de conducción interna de sus plataformas que mantienen el saldo de afrontar la inclusión en términos de género, y etnias, o el de hacer efectivos los recursos del dialogo dialectico para los consensos o el voto sin presiones o constreñimiento para dirimir conflictos intramovimiento, situaciones referidas por los entrevistados u observadas en terreno.

La débil educación política, incide en prácticas culturales menos democráticas o antidemocráticas, que son ejercidas en algunas de las plataformas estudiantiles de los dos países; las organizaciones que agrupan a los estudiantes requieren un esfuerzo mayor por generar espacios de formación política, pero supra sectarios, alterdemocráticos, es decir, escenarios de estudio y diálogo político de NOSOTROS con los OTROS, no de YO con YO, rompiendo esa inercia histórica del partidismo o sectarismo tradicional y generando prácticas de formación política y educación para la democracia, de “nosotros” con los “otros”.

Más por sus deseos o aspiraciones y el desarrollo de su discurso sobre los derechos sociales y la democracia, estas plataformas llegan a establecer la relación o círculo virtuoso entre educación como derecho, democracia como sistema que fortalece el estado social de derecho; la educación como factor de desarrollo y al Estado bajo régimen democrático como garante de los derechos y en consecuencia de la educación y el desarrollo, círculo en el que, la educación incluye la cualificación política del pueblo o ciudadanía. Pero, este círculo pensado, cómo se piensa o desea la democracia en estos movimientos universitarios, choca con el legado cultural y el peso histórico de la



exclusión a que han sido sometidos estos pueblos, en los procesos de educación y democratización de sus países, por tanto, bases y dirigentes de estos movimientos, pueden terminar replicando los vacíos o “vicios” de las prácticas anti democráticas que enrostran a las clases políticas y dirigentes, generando esa tensión entre la democracia deseada, formalmente planteada en discursos y estatutos de los universitarios o constituciones de los Estados y la democracia referida por Bobbio (1984) como “real” (p.16) o vivida al interior de los movimientos universitarios.

Otro elemento conclusivo radica en la incidencia de los partidos o movimientos políticos en las organizaciones estudiantiles y desde ellas, en las plataformas que articulan el movimiento universitario, que pueden dar un gran aporte a la formación y cultura política de las bases o pueden llevar a la vivencia del círculo vicioso de prácticas de conducción menos democráticas, mermando la autonomía estudiantil y cooptándola a los intereses del sector político que gane la conducción de las organizaciones o plataformas; lo que También demanda, formación para nuevas formas de liderazgo con enfoque democrático, colectivo y pro-participativo.

En contrapartida, otra dimensión que se articula con las anteriores es la capacidad de afrontar y procesamiento de las zonas grises (p 13-14), por parte de quienes componen y conducen estas plataformas, y en esa dimensión aparece de nuevo la educación y en específico la educación cívica y política como aportante a esa capacidad; que puede llevar a las distintas organizaciones que interactúan en procesos de movimientos sociales a encontrar modos de motivar a las bases, lo que implica entre otros, asumir modos de gestión de los disensos para construir consensos. Es en este punto que se puede tomar como referente esperanzador, el hecho de que todos los actores sin distinción de plataformas u organizaciones, asumen los principios de Empatía, transparencia, la no violencia y el debate como ejercicio democrático, en lo que coinciden con Bobbio (1986, p. 30-31) y en el que, el consenso no niega ni reprime el conflicto y los disensos sino que los afronta, dialógicamente, como base para intentar escenarios y ejercicios de articulación que lleven a prácticas de mayor participación democrática que, a su vez, motiven de nuevo a las bases y fortalezcan la cohesión de los mismos movimientos y plataformas.

Pero para ello se requiere también de otro elemento que reclaman los estudiantes a sus confrontados o contendores políticos: Voluntad política, para tomarse en serio el abordaje de temas pendientes de su democracia interna, en clave de derechos humanos, entre ellos, temas de inclusión de género y etnias y la articulación del respeto



a la diversidad de pensamiento político con el respeto a la autonomía sectorial del movimiento y congresos para revisión de sus estatutos, aún pendientes.

Notas

1. Esta ponencia hace parte de los avances de investigación doctoral, en torno a la “democracia en los actuales movimientos universitarios de Colombia y Chile 2016 - 2019”, que cuenta con el aporte de la Beca CONICYT folio 21160985.
2. Colombiano, Magister en Doctrina y Ética Social de ILADES- Universidad Alberto Hurtado de Chile. Candidato al doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado.
3. El texto en negro, es cita textual de Aguilera (2014. P.31), los textos resaltados en negrilla son complementos del autor del proyecto de investigación.

Bibliografía

- Aguilera, O. (2014). *Generaciones: Movimientos Juveniles, políticas de la identidad y disputas por la visibilidad en el Chile Neoliberal*. Buenos Aires: CLACSO.
- Archila, M. (2012). El movimiento estudiantil en Colombia, una mirada histórica. *OSAL N° 31*, 71-104.
- Bobbio, N. (1986). *El futuro de la Democracia*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Bobbio, N. (1989). *Liberalismo y democracia*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Campos, A. (2014). Sentido de la educación y el desarrollo humano: Perspectiva educativa. *Revista educación. unife*, 11-23.
- Castells, M. (2012). *Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet*. Madrid: Alianza Editorial.
- Cortés, A. y Villalobos, C. (2018). El Derecho a la Educación en el Chile Contemporáneo. Cuatro Argumentos Para Su Reconocimiento Institucional. En Gajardo, J y Vasquez, Y. *Nueva Constitución. Ideas y propuesta para el cambio constitucional* (págs. 135-154). Santiago de Chile: Rubicon.
- Cruz, E. (2012 N° 37). "Movimientos sociales y democracia: Una reflexión a propósito del caso Colombiano". *Revista Diálogos de Saberes*, 115-128.
- De Sousa, B. (2017). La Ola podemos. En B. Bringuel, & G. e. Pleyers, *Protesta e indignación global: Los movimientos sociales en el nuevo orden mundial* (págs. 47-52). Buenos Aires: CLACSO.



- Demo, P. (1999). Educación y desarrollo. Análisis de una relación casi siempre fantasiosa. En CEPAL, *Sociología del desarrollo, políticas sociales y democracia* (págs. 243-254). Santiago de Chile: CEPAL.
- Donoso, S., & Marisa, V. B. (2017). *Movimientos sociales*. Santiago: COES.
- Fairclough, H., & R, W. (2000). "Análisis crítico del discurso". En T. Van Dijk, *El discurso como interacción social* (págs. 367-404). Barcelona: Gedisa.
- FEUSACH. (16 de Diciembre de 2015). *Estatutos FEUSACH*. Obtenido de <https://bit.ly/3hML1ao>
- Goffman, E. (2012). *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Goffman, E. (2012). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Lopera, S., Pardo, E., & Carlos, H. (10 de Octubre de 2018). *La silla Vacía*. Obtenido de La Silla Vacía: <https://bit.ly/3oiYI3d>
- MANE. (23 de 10 de 2013). *www.mane. Colombia.org*. Obtenido de <https://bit.ly/38goqjl>
- McAdam, D., Tarrow, S., & Ch, T. (2005). *Dinámica de la contienda política*. Barcelona: Hacer.
- ONU. (12 de 12 de 2015). Declaración de los derechos Humanos. *un.org*. Obtenido de www.un.org: <https://www.un.org/es/documents/UDHR>
- Pleyers, G. (2006). En la búsqueda de actores y desafíos societales. La sociología de Alain Touraine. *Estudios sociológicos*, 733-756.
- Pleyers, G. (2015). Volverse actor: Dos vías para los movimientos sociales en el siglo XXI. *Revista de Estudios sociales*, 179-183.
- Pleyers, G. (2016). Internet y las plazas; activismo y movimientos de la década 2010. En M. A. Ramírez, *Movimientos sociales en México: apuntes teóricos y estudios de caso* (págs. 165-178). Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- PNUD. (1995). *Informe Sobre Desarrollo Humano 1995*. Ciudad de México: Harla S.A de C.V.
- PNUD. (2011). *Resumen. Informe sobre Desarrollo Humano 2011*. Virginia, USA: Colorcraft.
- Ponce, C. (2016). Claves para entender a los líderes universitarios chilenos y a sus organizaciones políticas. En M. L. Jiménez, *Jóvenes en movimiento en el mundo globalizado* (págs. 405-435). Ciudad de México: UNAM, NEWTON edición.
- Sartori, G. (2007). *¿Qué es la democracia?* Madrid: Taurus.
- Tilly, C., & Wood, L. (2010). *Los movimientos sociales, 1768-2008 desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona: Editorial Crítica.



Torres, R., & Carlos, S. J. (2019). Educación, movilizaciones de estudiantes y conflicto político en Chile y Colombia: algunas reflexiones desde una perspectiva comparada. *Revista temas sociológicos N°24*, 301-337.

Touraine, A. (1994). *Critica de la modernidad*. Buenos Aires: F C E.

Touraine, A. (2.000). *¿Qué es la demcoracia?* Ciudad de México: F C E.

Vargas, V. (01 de Junio de 2017). *El movimiento estudiantil más allá de la Confech*.

Obtenido de Archivo Chile: <http://www.archivochile.com>.

VI, P. (1967). *Enciclica Populorum progressio*. Ciudad del Vaticano: Editorial Vaticana.



Línea Temática 3.

**Relación entre
movimientos sociales,
sociedad civil y Estado**



Brasil, Política e Aceleração.

Javier Alejandro Lifschitz

Resumo

Neste artigo abordamos o período no Brasil que vai do golpe à consagração de Bolsonaro, como uma fase na qual pode-se perceber que aconteceram transformações no campo do político, algumas bastante estruturais. Abordamos principalmente mudanças na temporalidade política, enquanto experiência de duração, de periodização. Apresentamos o conceito de temporalidade política e discutimos, com base em Hartmut Rosa, Paul Virilio e autores do Manifesto Aceleracionista, a relação entre velocidade e política. O conceito articulador é a máquina de guerra ou máquina de guerra semiótica, como formularam Deleuze e Guattari. Configurou-se durante o golpe uma máquina de discursos, interconectados, da mídia, da justiça e do parlamento, juntos e cada um a seu modo, operando a deslegitimação de um governo popular. Nosso foco será explorar esses agenciamentos, que agregam cadeias semióticas de regimes diferentes em uma mesma operação, um agenciamento que envolveu as mídias, o sistema jurídico e parlamentar e cujo efeito foi a aceleração. Analisaremos a aceleração no campo jurídico e mediático e os efeitos que isso provocou na prática política e a mudança que implicou o uso do whatsapp. Como agir em um tempo acelerado? Como subverter a predominância imaginária da velocidade? Deve-se replicar, produzir um WhatsApp insurgente? Nos comentários finais discutimos essas questões e a ideia de que se existe um cyber exército para difundir fake news deveria haver outro para desmontar essas mensagens.

Palavra chave

Golpe no Brasil; Golpes brandos; Guerras híbridas.

Introdução

Se o momento de concluir é o momento de compreender, a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018 consagra o golpe institucional contra a presidenta Dilma, e consuma o verdadeiro vendaval institucional e cultural que se instaurou nos últimos anos. Houve desconstruções sociais de todo tipo: na trama política, nas instituições jurídicas e na cultura. Em muitos aspectos, Brasil é hoje um país muito diferente daquele de cinco anos atrás.

O que resta do Estado de Direito após este dilúvio? O que resta da República?



Das sociabilidades políticas? O que resta das categorias que usávamos para pensar a própria política?

Se algo ficou para atrás, convém analisar sobre que restos está sendo construída a nação, inclusive aspectos aparentemente muito abstratas, como a temporalidade política.

A temporalidade política, enquanto experiência de duração, de periodização, também se aplanou e isso possui muitas implicações na prática política.

O que se impôs foi o que Ranciere (1996) denomina o *tempo da polícia*, o tempo ininterrupto das instituições, que teve como suporte uma potente máquina de guerra, para operar em “guerras não convencionais de dominação”, como aponta Korybko (2018).

O que ocorreu durante o golpe não foi somente uma sequência de atos jurídicos irregulares, ou apenas acordos parlamentares destituíntes, foi um profundo processo de transvaloração política, no sentido regressivo, que necessitou de múltiplos meios no campo signifiante. Configurou-se uma máquina de discursos, interconectados, da mídia, da justiça e do parlamento, juntos e cada um a seu modo, operando a deslegitimação de um governo popular.

É sugestiva assim a idéia de uma máquina de guerra, não estritamente militar (embora militares fizessem parte desta), uma máquina semiótica, como formularam Deleuze e Guattari (2012) e que durante todo esse processo do golpe no Brasil teve como característica renovar permanentemente seus efeitos de aceleração. O que queremos destacar nesse artigo e que possui muitas implicações para a política atual é o tema da velocidade da máquina de guerra, uma máquina que, como dizia Paul Virilio (1996) em seu estudo *Velocidade e Política*, está voltada à aceleração, porque sua meta é reduzir ao mínimo o tempo de ação do adversário.

Temporalidades e aceleração política

As temporalidades políticas são construções sociais acerca do sentido do que consideramos o atual, o passado, o porvir e a memória. Trata-se também de um tempo que se inscreve no capitalismo, no controle dos corpos, e do controle disseminado, como dizia Foucault, e que hoje encontra-se cada vez mais imbricado com máquinas semióticas produtoras de sentido e de aceleração.



Conforme Hartmut Rosa (2015), as mudanças na base tecnológica das sociedades, desde a modernidade, produzem *aceleração social*, dos ritmos de vida, das técnicas e da ideologia de mercado, que age como força propulsora. O tempo se acelera, diz o autor, e isso tem implicações também para a ação política, porque esta parece estar sempre defasada em relação ao mutante da cena social.

Outras visões reconhecem esse fenômeno da aceleração. Nos referimos especialmente ao *Manifesto Aceleracionista*.

Nesse manifesto argumenta-se que a aceleração foi sempre um aspecto fundamental do capitalismo, e que no neoliberalismo é ainda mais intensa e atrelada a catástrofes de todo tipo, tanto no campo social, como no meio ambiente, provocando efeitos devastadores e também nos partidos e organizações políticas progressistas, a medida em que inibem sua capacidade de reação.

Contudo, o manifesto propõe que se adote também uma política aceleracionista mediante a utilização dessas novas bases tecnológicas da aceleração social. Utilizar a infraestrutura digital, o sistema de redes sociais, a fusão de tecnologias, como uma plataforma de lançamento de políticas pós-capitalistas. Assim, perante a aceleração capitalista, a resposta seria uma nova plataforma tecno-social pós-capitalista.

Mas como tomar a aceleração como um aliado sem debater os riscos de uma ação política especular? Como algo que gera catástrofes, segundo os autores do manifesto, pode virar seu contrário? A aceleração não é por acaso um modo de gozar repetitivo implicado na digitalização dos laços sociais? (Alemán, 2018). Retomaremos esse tema posteriormente.

Política e velocidade no golpe

Poderíamos dizer que no Brasil, desde 2013, a política é velocidade; sucede em um contínuo absoluto que parece não admitir cortes. As unidades do tempo político se tornaram muito breves, tão breves que já não há superfície para escandir o tempo em conjunturas tão voláteis.

Já a certa distância do golpe de 2016, podemos perceber além dos rumos não previstos que tomaram certos acontecimentos, estas mudanças mais estruturais, que inibem a reação política. Não podemos somente atribuí-la a incapacidade dos dirigentes. A ação política do partido dos trabalhadores ficou comprimida ao mínimo, porque uma máquina de guerra conseguiu produzir uma nova temporalidade política, intensificado e expandindo seus vetores de aceleração, parafraseando Paul Virilio.



Sabemos também que as máquinas de guerra não são acéfalas. São máquinas de guerra situadas, na lógica de confronto de classes, e que no caso brasileiro agregou o neoliberalismo dos empresários, os interesses estrangeiros, o conservadorismo patriarcal das classes médias, o fundamentalismo dos crentes, e as pressões de militares, policiais e milícias.

Claro está que há o aspecto dos pactos e acordos de interesse que tornam pertinentes as “teorias conspiratórias” na explicação do golpe. Há também as ativações da longa duração, o papel de uma lógica escravocrata persistente, como mostrou Jesse de Souza (2018).

Mas além dessas articulações, há o aspecto do agenciamento, das estruturas e seus recursos semânticos, que se interpenetram em um coletivo de enunciação que trabalhou incessantemente para deslegitimar os presidentes e os governos do Partido dos Trabalhadores.

Assim, nosso foco não será o de explorar o xadrez dos grupos de poder e suas articulações, mas sim esses agenciamentos abrangentes, que agregaram cadeias semióticas de regimes diferentes em uma mesma operação, um agenciamento que envolveu as mídias, o sistema jurídico e parlamentar.

Nosso interesse está voltado para como essas diversas corporações de Estado, com diferentes regimes de discurso se integraram nessa máquina de guerra inusitada por sua abrangência, e sustentada em crenças fundantes da vida social, representações que fazem parte da “instituição imaginária da sociedade” – como dizia Castoriadis (1982). Como duvidar das instituições fundantes?

A mídia e os afetos

A mídia que operou o agenciamento da deslegitimação de Lula, Dilma e do PT está inserida em uma estrutura extremadamente monopólica. São grupos familiares muito restritos e estreitamente vinculados ao empresariado por compromissos recíprocos e também ao Estado.

Como tem sido bastante debatido (Souza, 2016), foi um agenciamento chave no golpe, isto porque ela opera com a intersubjetividade, emoções, memórias.

Segundo Deleuze, o regime da máquina de guerra é antes de tudo um regime de emoções, porque o afeto é sempre resistente, enquanto a emoção é descarga rápida de sentimentos. “As emoções são projéteis, tanto quanto as armas”. (Deleuze &



Guattari, 2012). E a mídia monopólica operou no Brasil nesse plano, criando a incerteza em longa escala utilizando-se, como apontou Horacio Gonzalez com relação ao seu papel no contexto político de Macri na Argentina, de “técnicas de emissão, disciplinamento e controle de excitabilidade populacional” (González, 2018).

Cabe explicitar um pouco as funções do gênero *noticiário* nesse processo. O jornal de notícias é fundante de percepções políticas porque é assimilado como o critério de realidade. Enquanto a novela é o gênero social da distração da realidade, o *noticiário* é o gênero que aparece como expressão dessa própria realidade. Como representante do que “realmente sucede” é um gênero que nos interpela diariamente e que recria cotidianamente a proeza de nos sujeitar a uma “comunidade imaginada” (Anderson, 1993)

Como afirmou Bourdieu, (1997) é um gênero que tem a capacidade de impor princípios e visões do mundo, sendo por isso muito atrelado a política e também à velocidade, que está inscrita nas estruturas e mecanismos do próprio campo, “porque a concorrência pela prioridade da notícia coloca toda a prática jornalística sob o signo da velocidade ou da precipitação”.

No processo do golpe, o Jornal Nacional da Globo e demais jornais da mídia televisiva e escrita usufruíram de forma inusitadamente intensa dessa poderosa ficção de serem o meio através do qual a própria realidade é comunicada. Os *noticiários* produziram uma narrativa extensa e repetitiva sobre o tema da corrupção para criar desafetos e desidentificações. Operaram um contínuo de notícias, quase ininterrupto que tirou violentamente da sociedade seus motivos de reflexão sobre si mesma, rebaixou seus níveis de autoproteção e seus recursos de distanciamento. Não houve “perda de tempo” nos *noticiários* monopólicos.

O ritmo jurídico

A justiça é lenta, uma frase sempre ouvida, dita e constatada no Brasil. No entanto, durante o golpe a justiça adquiriu uma velocidade também inusitada, juntamente com uma visibilidade inédita. Interessante, neste sentido, a observação biográfica de Boaventura:

Quando, há quase trinta anos, iniciei os estudos sobre o sistema judicial em vários países, a administração da justiça era a dimensão institucional do Estado com menos visibilidade pública. Entretanto, a partir de 2014 no Brasil esta operação judicial e policial de combate à corrupção, em que estão envolvidos mais de uma centena de políticos,



empresários e gestores, tem-se vindo a transformar a pouco e pouco no centro da vida política brasileira (Boaventura, 2016:62).

Quando se diz que o golpe contou com o ativismo judicial contra o PT, isso operacionalmente significa duas coisas. Por um lado, operações de seletividade nos processos. É evidente que o PSDB foi poupado na Operação Lava-Jato e em outros processos tramitados no Ministério Público, e essa seletividade permitiu em grande parte a aceleração dos processos jurídicos. Por outro lado, procurou-se antecipar as penas, encarcerando dirigentes do PT e o presidente Lula, cujos processos ainda estavam tramitando na justiça.

Também se aplicaram medidas judiciais ilegais e inconstitucionais, produção de várias liminares visando o mesmo ato político e outros desvios institucionais planejados. Falseamentos, que poderíamos denominar *barrocos*, porque todos os subterfúgios jurídico ficcionais foram apresentados ao público e longamente justificados.

Os golpes brancos, ou golpes dentro da lei, são em certo sentido uma novidade na América Latina. O Brasil não foi o único caso, aconteceram em série, em Honduras, Paraguai e Brasil, com características semelhantes, embora não tenham obedecido a um único modelo (Proner, 2016).

Historicamente na América Latina as instâncias jurídicas em muitos casos acompanharam ou foram omissas em relação a golpes militares, mas neste novo caso emprestaram ao golpe o fundamento de sua legitimidade social. Se poderia afirmar que se envolveram até o pescoço na reinterpretação interessada do direito, segundo afirmam muitos juristas, fato que terá consequência sobre o futuro da democracia.

No Brasil, para que o impeachment fosse juridicamente possível era necessária a comprovação de um crime de responsabilidade, conforme definido na Constituição, e dito *crime* não ficou demonstrado (Assis, 2016). Foi suficiente uma deslealdade shakespeariana (do Vice-Presidente e do Presidente da Câmara dos Deputados), para que o processo adquirisse uma celeridade insólita. Entre a acusação e o impeachment passaram-se apenas dois meses.

A Operação Lava-Jato foi motor dessa aceleração jurídica. Com a entronização do juiz Moro, representante do que Ingeborg Maus (2000) denomina a “ascensão dos juizes da corte”, a função jurídica se altera. Ocorre a sobreposição da lógica política à lógica judicial, alterando-se de tal forma a função jurídica que a busca de médios de aceleração se torna indiscriminada.



Paralelamente ocorriam as investigações da Polícia Federal, a partir das delações. O que devia ser o início de um processo de investigação, tornou-se um conjunto de narrativas de antecipação de culpabilidade. Inverteu-se assim e acelerou-se todo o processo, porque da delação, supostamente sigilosa, passava-se imediatamente ao julgamento televisivo, pulando-se assim muitas normas procedimentais.

Logo, a retroalimentação das cadeias significantes jurídicas e da mídia, deu início a uma sorte de “novelização” da política, com seus respectivos capítulos, nomeados com títulos sarcásticos. Micro eventos policiais em formato televisivo, que em tempo real deram intensidade a essa máquina semiótica.

Um outro aspecto interessante é que a máquina funcionou a partir de transbordamentos ilegais, vazamentos, como comenta um reconhecido jornalista e analista das mídias:

Nenhum ente privado deveria ter acesso aos próximos passos da operação (Lava-Jato). Essa é a teoria. Porém, a prática é outra. A fonte desta página provou ter informações privilegiadas de que na nova fase da Lava Jato serão quebrados os sigilos de Lula, de Marisa, de todos os filhos deles, de suas empresas, do Instituto Lula, da empresa de palestras de Lula, de Fernando Bittar etc. O mais estarrecedor, porém, foi a informação de que todos os veículos de uma dita “imprensa simpatizante” (como são conhecidos na Lava Jato os veículos que cumprem determinações dos investigadores no sentido de fustigar petistas) já dispunham de cópia da decisão de Moro quebrando o sigilo das 43 pessoas e entidades que o leitor irá conhecer em seguida (Guimaraes, 2016:113).

Logicamente, aqui estava em jogo mais do que o desejo das empresas lucrarem com a antecipação da notícia, tratava-se de uma poderosa estratégia utilizada com vistas a induzir posicionamentos de valor em momentos chave do desenrolar do golpe.

A aceleração das redes sociais

“A política contemporânea – dizia Paul Virilio - tem a ver cada vez menos com a posse do espaço e cada vez mais com a posse do tempo”, com o domínio da instantaneidade da ação para derrotar o adversário surpreendido.

Apesar de todo o embate, a popularidade de Lula e do PT às vésperas das eleições de 2018 foi crescendo, e a direita estabeleceu novas estratégias, adotando novo vetor de aceleração. Tratou-se do uso político do WhatsApp, um tema que recoloca em pauta a relação da máquina com a produção de sentido e com a velocidade.



Em um outro texto, sobre as manifestações de junho de 2013 no Brasil, abordamos o uso do *facebook*, e o duplo acontecer que se estabeleceu na política: das redes às ruas e das ruas às redes (Lifschitz, 2013).

Mas com o uso do WhatsApp a questão se apresenta de uma outra maneira. Trata-se de um meio de comunicação extremamente popular, inscrito na intimidade do vínculo. E tudo isso foi transferido para o campo político por meio de agenciamentos transnacionais, com base em massa de dados e análise de perfis dos usuários, com rastreamento e emissão de mensagens por *robots* diferenciadas por grupos.

Também saberes da inteligência militar e da psicologia positiva, que exploram os territórios das sinapses comunicativas com tecnologia avançada (Koribko, 2018) foram utilizadas para capturar operações de gozo no campo político.

“Uma nova forma de regulação experimentada como liberdade”, afirma Zizek (2018) em relação a essa nova peça da máquina de guerra.

A pergunta sobre a máquina e o sentido deve então ser recolocada. “O sentido emerge quando a máquina se detém”, diz Lacan (1985) fazendo referência a máquina como metáfora da linguagem. Porém, nesta lógica do WhatsApp parece acontecer o contrário. As máquinas semânticas parecem criar sentido, corte e conjuntura.

Mas seria o WhatsApp o demiurgo de uma direita fascista? Cabe como contra-argumento que estes recursos também foram utilizados nos estados Nordeste e os resultados eleitorais foram outros. Não há determinismo tecnológico, cada cultura processa a tecnologia de maneira distinta. Isso não minimiza, entretanto, o alcance que estes meios tiveram para enquadrar a política no espaço retangular do celular, e para capturar camadas de desejo e produzir identificações, inclusive com candidatos desconhecidos, como o governador eleito no Rio de Janeiro.

Não foi pouca coisa, um discurso de *fake news* se entronizou, mesmo sem lastro ideológico, por meio de mensagens imagéticas fortemente binárias emitidas por milhões por *robots*. Um verdadeiro exército replicante de mensagens financiado pelo capital privado. Uma máquina que se conectou de forma direta com o poder econômico e as bases religiosas conservadoras, e que conseguiu mediante a torsão da linguagem subverter a narrativa argumentativa.



Comentários finais

Vimos que as forças golpistas no Brasil convergiram em uma máquina de guerra semiótica, que alterou os parâmetros temporais da política.

Não é a primeira vez que se utilizam máquinas de guerra semióticas para derrotar um governo popular. Mas com o atual agenciamento ganharam-se milhões de almas; rebanhos enormes, que fizeram até os santos duvidarem. Como dissemos, Um bombardeio mediático e jurídico foi utilizado para quebrar uma identificação social e produzir outra.

Chegamos assim a uma situação em que a máquina de guerra passou a dominar a conjuntura em movimento acelerado: depuseram Dilma, prenderam Lula, elegeram o candidato de extrema direita.

Cabe perguntar agora para uma política progressista: Como agir em um tempo acelerado? Como subverter a predominância imaginária da velocidade? Deve-se replicar, produzir um WhatsApp insurgente?

Afirma o diretor de *Le Monde Diplomatique* que se existe um *cyber* exército para difundir *fake news*, deveria haver outro para desmontar essas mensagens, para revelar verdades.

Como vimos, o manifesto aceleracionista propõe também que se utilize essas novas bases tecnológicas de aceleração social como uma plataforma de lançamento de políticas pós-capitalistas.

Mas podemos nos iludir com a máquina de guerra para produzir verdades?

Como afirma Jorge Aleman (2018), “o ódio à política é o ódio ao simbólico”, e agregamos, o simbólico não é apropriável por qualquer máquina, por qualquer velocidade. Porque a aceleração nunca é toda. “Não há um tempo homogêneo”, como dizia Benjamim. Estamos sempre perante diferentes temporalidades que se bifurcam e misturam.

Daí a importância do “avesso do golpe”, dos legados da resistência durante todo esse período, da luta das mulheres, das caravanas, dos acampamentos pela liberdade de Lula, dos coletivos negros, dos sem-terra, dos quilombolas, dos povos indígenas. Movimentos sociais que produziram muitos ganhos políticos no período anterior, e que hoje se defrontam, nos primeiros meses do governo, com uma outra máquina de guerra, com outras características e configurações.

Bibliografia

Assis, D. (2016) Mídia e novo golpe, In: Proner, C., et. all. (org.) A resistência ao golpe de 2016, Clacso, Canal 6 Editora, São Paulo.



- Alemán, J. (2018) El “aceleracionsimo”, un nuevo debate en la izquierda, Pagina 12, 15 de Marzo de 2018.
- Anderson, B. (1993) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen del nacionalismo, Fondo de Cultura Economica, Mejjico.
- Avanessian, A. e Reis, M. (2017) Aceleracionismo. Estrategias para una transición al postcapitalismo, Caja Negra, Buenos Aires.
- Boaventura, S. (2016) Os perigos da desordem jurídica no Brasil, In: Proner, et. all. (org.) A resistência ao golpe de 2016, Clacso, Canal 6 Editora, São Paulo.
- Castoriadis, C. (1982) A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Deleuze, G. e Guattari, F. (2012) Mil Platôs, vol. 5, Editora 34, São Paulo.
- González, H. (2018) *Lo que se incubaba*, jornal Pagina 12, 10 de Dezembro de 2018.
- Guimarães, E. (2016) Confirma prova de que Lava Jato e mídia formam uma polícia política In: Proner, C., et. all. (org.) A resistência ao golpe de 2016, Clacso, Canal 6 Editora, São Paulo.
- Lacan, J. (1985) O Seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, Zahar, Rio de Janeiro.
- Lifschitz, J. (2018) O avesso do golpe no Brasil: formas de resistência, Teoria e Debate, Edição 178, Novembro, São Paulo.
- _____ (2013) “Sobre as manifestações de junho e suas máscaras”. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social. São Paulo, v. 6, nº 4, pp. 669-715.
- Maus, I. (2000). Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na ‘sociedade órfã’. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 58, nov. 2000
- Proner, C. (2016) Golpe branco no Brasil: Dilma alerta na ONU. In: Proner, C., et. all. (org.) A resistência ao golpe de 2016, Clacso, Canal 6 Editora, São Paulo.
- Korybko, A. (2018) Guerras híbridadas, Expressao Popular, São Paulo.
- Ranciere, J. (1996) O Desentendimento, Editora 34, São Paulo.
- Rosa, H. (2015) Social Acceleration, A New Theory of Modernity, Columbia University Press
- Souza, J. J. (2016) A elite do atraso: da escravidão à lavajato, , Leya Editora, São Paulo.
- Virilio, P. (1996) Velocidade e Política, Estação Liberdade, São Paulo.
- Žižek, S. (2018) Felicidade? Não, obrigado. Revista Nexos, 03, Maio.



A construção da agenda da política de igualdade racial no Brasil

Carlos Augusto Sant'Anna Guimarães¹

Resumo

Ao longo do século XX, o Brasil foi retratado como um tipo exemplar de harmonia racial, simbolizado pela ideia-força da democracia racial. Desde o final da década de 1970, com a reemergência do Movimento Negro, este passou a questionar a dominação racial na sociedade brasileira expressa na ideologia da democracia racial. Em meados dos anos de 1990, o tema das desigualdades raciais finalmente alcançou a agenda governamental. Este trabalho analisa o processo de construção da agenda da Política de Promoção da Igualdade Racial no Brasil e o papel do Movimento Negro. Alicerçado no Modelo do Processo Político e na Teoria dos Múltiplos Fluxos, busca-se desvelar as dinâmicas e interações do Movimento Negro com o Estado. O processo de agendamento é complexo, multifacetado e dependente do contexto. O arcabouço teórico mobilizado compartilham o tempo e a contingência como variáveis explicativas relevantes. As conclusões sugerem que a construção da agenda e a formulação de políticas públicas são cada vez mais influenciadas por processos que extrapolam os limites dos Estados nacionais. O trabalho conclui que o contexto institucional e a dinâmica de interações entre os atores importam no processo de formulação de políticas públicas dessa natureza.

Palavras chave

Agendamento; Contexto Institucional; Estado; Movimento Negro; Políticas Públicas.

Introdução

A reemergência do Movimento Negro no Brasil faz parte do processo de transição democrática iniciada na década de 1970. Desde o início dessa década, inúmeras organizações negras foram criadas em diferentes pontos do país (Santos, 2007; Pereira, 2008). Algumas de cunho cultural, outras de orientação mais política, que passaram a fazer a crítica à ditadura militar e também ao caráter racista da sociedade brasileira.

Em meados dos anos de 1980, inicia-se a inflexão no padrão da política racial brasileira. O Estado passou, paulatinamente, a desenvolver políticas visando à inclusão social e reconhecimento da população negra (Rodrigues, 2014; Wade, 2006). No entanto, somente após a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e pela Vida,² em 1995, que a política racial deu sinais inequívocos de mudança de direção. No



dia 20 de novembro daquele ano, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), após receber os organizadores da marcha declarou que o Estado e a sociedade brasileira eram racistas. Até então o racismo não era reconhecido pelas autoridades e elites brasileiras como um problema político. Na narrativa da democracia racial, racismo, discriminação e preconceito racial estão circunscritos à dimensão privada. Naquele mesmo dia, o presidente assinou decreto instituindo o Grupo de Trabalho de Interministerial para Valorização da População Negra (GTI).

Após deixar a Presidência, refletindo sobre o tema, Cardoso (2006) comentou: “Abri um leque de ações nessa área, sem radicalismo, (...), com o objetivo de gradualmente mudar a ‘política racial’ do Brasil” (p.550). A importância da marcha se expressa no fato de o termo *democracia racial* deixar de ser uma forma legítima de se referir ao Brasil. O “movimento negro fez da democracia racial um conceito não apropriado sem volta” (Telles, 2003, p.75). Sobre essa questão, Cardoso afirmou que no Primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH), de 1996, “(...) se reconhece a existência do racismo no país e já não se fala de ‘democracia racial’, e sim em ‘raças distintas” (p.551).

O terceiro episódio marcante desse processo foi a realização da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, doravante 3ª CMR, organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2001, na cidade de Durban, África do Sul. Essa conferência retirou a última camada do véu que encobria as desigualdades raciais no Brasil, e modificou a percepção das autoridades brasileiras sobre o tema, alçando-o para a agenda decisória.

Antes, porém, de adentrar a análise do caso, cabe observar o ensinamento de Schopenhauer (2010): “(...), a tarefa não é ver o que ninguém viu ainda, mas pensar aquilo que ninguém pensou a respeito daquilo que todo mundo vê”. (p. 157).

Nesse espírito, o esforço deste artigo não é o de apresentar um fato ou fenômeno novo, mas aduzir uma nova interpretação aos fatos já demasiadamente descritos. Nesse sentido, passo em revista três episódios bastante citados, mas pouco problematizados por aqueles que abordaram as primeiras formulações de políticas de promoção da igualdade racial (Jaccoud & Begin, 2002; Rios, 2012; Ribeiro, 2014).

Assim, não argumentarei que se trata de uma disputa de narrativas (Rios, 2012). Nem que a criação do GTI foi o resultado direto da pressão exercida pela marcha sobre o governo federal, como defendem os seus organizadores e alguns analistas, nem, ainda,



que o GTI havia sido elaborado pelo governo, independentemente da marcha.³ Com base no Modelo de Múltiplos Fluxos, demonstrarei a simultaneidade dos eventos. Solução e problema encontraram-se no Palácio do Planalto, naquele 20 de novembro de 1995.

Metodologia

Este trabalho analisa o processo de agendamento da questão racial no Brasil. No processo de reconstrução da trajetória do fenômeno, identifiquei como três os principais episódios ou vetores da entrada do tema na agenda decisória do governo federal brasileiro. O ponto de partida é o ano de 1995, quando ocorreu a marcha “300 anos de Zumbi dos Palmares”, e a criação do Grupo de Trabalho de Interministerial para Valorização da População Negra (GTI), eventos nacionais que deflagraram o processo. O estudo também assume que, cada vez mais, eventos internacionais afetam a agenda governamental e decisória dos países. Assim, toma-se como um episódio marcante a realização da 3ª CMR, em 2001.

A trama investigativa foi tecida com os fios dos conceitos de movimentos sociais e estrutura de oportunidades políticas provenientes da Teoria do Processo Político combinado com o Modelo de Múltiplos Fluxos.

Este estudo valeu-se fundamentalmente da análise documental de fontes secundárias. O corpus da pesquisa foi formado por livros, capítulos de livros, artigos, teses e entrevistas com gestores e ex-gestores das agências de promoção da igualdade racial, militantes do Movimento Negro, publicadas em livros e revistas acadêmicas, como também aquelas disponíveis em sites na internet, compilação de leis, decretos e outros documentos oficiais, bem como notícias de jornais.

A análise deu-se por meio do cotejamento do material empírico com os conceitos teóricos, de modo a produzir uma narrativa capaz de, a partir dos episódios, demonstrar as configurações causais que atuam no caso analisado. Ao mesmo tempo, identificar a existência de relações não-lineares entre as variáveis independente e dependente.

A Política Racial

O termo política racial surgiu da crítica aos limites da abordagem das relações raciais para explicar as desigualdades raciais em sociedades multirraciais e multiétnicas. Hanchar (2001) e Hanchar e Chung (2004) assinalam que Ira Katznelson (1973), em *Black Men, White Cities*, divergindo dos *approaches* pluralista e comportamentalista das



relações raciais, cunhou o termo políticas raciais, introduzindo-o no léxico da ciência política.

A perspectiva das relações raciais, ao fixar-se sobre aspectos comportamentais e atitudinais que desvelam o racismo e o preconceito (Hanchard, 2001) não precisa seu motor institucional e político. Assim, não apreende o racismo como uma forma de política. As abordagens ortodoxas consideram o racismo como um fenômeno pré ou pós-político, mirando comportamentos individuais, minimizando padrões sociais, culturais e históricos (Gilroy, 2007). Ao destacar atitudes e escolhas individuais, a explanação das relações raciais ignora o contexto institucional das políticas raciais e despreza o vínculo intrínseco entre raça e poder (Hanchard & Chung, 2004).

O *approche* da política racial amplia a nossa compreensão acerca das dinâmicas das interações sociais entre os grupos classificados como racialmente distintos, e oferece um sentido da dinâmica do poder, da identidade e da mobilização nos e entre grupos raciais (Hanchard, 2001), ajudando a desvendar as dinâmicas institucionais e de poder. Procurar-se, assim, não a reificação do conceito. Se raça não é o critério mais adequado para se referir às diferenças físicas e culturais entre seres humanos, seu uso, contudo, ainda é válido para elucidar realidades sociais. A extirpação léxico-discursiva da raça não soluciona o problema.⁴ Portanto, em vez de fixar-nos no vazio do conceito, devemos nos debruçar sobre a questão de como a noção de raça molda normas, padrões de comportamentos e estruturas sociais, e qual o seu papel na dinâmica do poder (Hanchard & Chung, 2004).

O conceito traz a lume que, em sociedades multirraciais e multiétnicas, instituições estatais criam regulamentações para induzir, modificar e regular comportamentos e atitudes individuais e coletivas. Destarte, as políticas públicas afetam de maneira distinta os diferentes grupos sociais, segundo suas características fenotípicas (raça e etnia). Mas, como adverte Hanchard, isso não implica afirmar que as políticas dessas sociedades sejam elaboradas com base na raça, mas que em “quase todas as dimensões da vida política (...) repercutem nas relações de poder entre e dentro dos grupos racialmente definidos de maneiras que não podem ser reduzidos às ‘variáveis’ de classe e nação” (p. 32).

Nesse mesmo diapasão, Andrews (1998) chama a atenção para as instituições cujas ações são vinculadas ao Estado, tais como partidos políticos, igrejas e sindicatos. Ou seja, mirar a problemática do racismo e a política racial de uma dada sociedade exige perscrutar acerca das relações entre Estado, sociedade política e sociedade civil.



Vetores do agendamento da questão racial no Brasil contemporâneo: Entre oportunidades políticas e janelas de políticas públicas

Após os ruidosos protestos que macularam as comemorações definidas pelas elites nacionais para a celebração da efeméride da abolição da escravidão, em 1988, com a “Marcha contra a Farsa da Abolição: nada mudou, vamos mudar” (Carvalho, 2005; Alberti e Pereira, 2007; Pereira, 2008), o Movimento Negro retornou às ruas, em 1995, primeiro ano do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo e professor da Universidade de São Paulo (USP), com publicações no campo de estudos de “relações raciais”. Naquele ano, o Movimento Negro celebrou o tricentenário da imortalidade de Zumbi dos Palmares, maior líder negro brasileiro, com a realização da “Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida”, em Brasília.

Quando a multidão, com mais de 30 mil manifestantes - vindos dos mais distantes rincões do país para protestar contra o racismo, em defesa a vida e da cidadania da população negra -, marchava para exigir políticas públicas de enfrentamento do racismo e das desigualdades raciais, eles não tinham garantias de que o presidente da República os receberia.⁵

Da marcha também participaram, sindicalistas, partidos políticos de esquerda e parlamentares negros, como, por exemplo, Benedita da Silva, primeira senadora negra do Brasil, e outros. No Congresso Nacional, houve sessão solene pelo dia 20 de novembro, graças ao apoio de deputados negros como o então deputado federal Paulo Paim (PT-RS) (Rios, 2012).

O Movimento Negro, como os demais movimentos sociais, por serem formados por pessoas com poucos recursos econômicos e políticos e sem acesso às elites governamentais e políticas, precisam ganhar as ruas, algumas vezes em mobilizações disruptivas. Com isso, poderia atrair a atenção das autoridades para as atribuições e situações adversas que os aflige enquanto grupo social, mas que, não são considerados como problemas pelo sistema político, e seu atendimento conflita com os interesses das elites. Segundo Tilly (2010), os movimentos sociais são uma forma específica de política contenciosa. Suas reivindicações são dirigidas ao Estado, ou o toma como o alvo das demandas ou mesmo quando é chamado para atuar como um árbitro de uma disputa. É contenciosa, visto que as reivindicações dos movimentos contradizem os interesses das elites. Segundo McAdam, Tarrow e Tittly (2009), um movimento social “é uma interação sustentada entre pessoas poderosas e outras que não têm poder: um desafio



contínuo aos detentores do poder em nome da população cujos interlocutores afirmam estar ela sendo injustamente prejudicada ou ameaçada por isso” (p. 21).

O Movimento Negro brasileiro é um conjunto diversificado e bastante matizado de grupos e organizações frouxamente articulados entre si (Cardoso, 2002). Considerando que o racismo é um fenômeno ubíquo, cuja complexidade e imbricações manifestam-se nas múltiplas dimensões do mundo social, a atuação antirracista também se faz presente em diferentes campos e áreas de atuação. Cinco perfis podem ser delineados conformando vertentes principais: religiosa; cultural; política; movimento de mulheres negras; educacional; e juventude. O Movimento Negro é, nessa perspectiva, um campo de atuação amplo e multifacetado, de difícil delimitação, como o é o racismo, um fenômeno que abunda em inúmeras e múltiplas situações.

Estrutura de oportunidades políticas

O Movimento Negro retornou às ruas, em 1995, para apresentar suas reivindicações e demandar do Estado políticas públicas, em função de uma estrutura de oportunidades políticas (EOP) favoráveis para a sua eclosão. O poder de mobilização dos movimentos sociais não é simplesmente uma função dos recursos que organizações e líderes controlam ou do nível de privações e/ou frustrações daqueles cujas lideranças dizem representar e em nome dos seus interesses procura mobilizá-los. Na realidade, a mobilização dependerá do nível de abertura/fechamento do sistema político no qual se está inserido (Eisinger, 1973). A capacidade de ação de um movimento social depende da estrutura de oportunidades políticas.

A teoria do processo político enfatiza que as mudanças na estrutura de oportunidades criam incentivos à ação coletiva de protesto. Por estrutura de oportunidades políticas compreende-se um conjunto de variáveis que assume um formato de uma configuração causal. Isto é, o efeito, a eclosão de um movimento social, resulta da interação dinâmica entre diferentes variáveis, não assumindo, portanto, uma relação linear entre variáveis independente e dependente.

Em geral, “as oportunidades e restrições políticas são situacionais” (Tarrow, 2009, pp. 106-107). A contingência é outra característica da EOP, na medida em que é incerta e só pode ser conhecida *post factum*. Uma EOP apresenta-se como incentivos a ações coletivas de protesto (Tarrow, 1997). Todavia, ela não se descortina da mesma maneira, intensidade e extensão para todos os contestadores e detentores do poder.



Inicialmente, Tarrow (1997) identificou quatro dimensões relevantes da estrutura de oportunidades políticas e, posteriormente (Tarrow, 2009, p. 105), no processo de inovação teórica, incorporou um quinto elemento à sua lista, quais sejam: 1) abertura do acesso à participação para novos atores; 2) evidência de realinhamento político no interior do sistema; 3) aparecimento de aliados influentes; 4) divisões emergentes no interior da elite; 5) repressão ou facilitação da dissidência.

Além de não-linear, uma EOP tampouco apresenta-se de maneira igual para os contendores. Assim como outros recursos, *e.g.*, dinheiro, poder, estruturas de mobilização, ela também é apresentada de maneira desigual para os movimentos. Mesmo os grupos com poucos recursos e desorganizados podem tirar proveito de uma EOP (Tarrow, 2009). A contingência é característica importante da EOP, uma vez que, introduz a incerteza, na medida em que o resultado só pode ser conhecido pela experiência.

EOP é apenas uma das variáveis necessárias para o surgimento de movimentos sociais (McAdam, McCarthy e Zald, 1996). Esses autores sustentam que há uma interação dinâmica e interdependente entre oportunidades políticas, estrutura de mobilizações e quadros interpretativos de ação coletiva. Desse modo, a EOP afasta-se da ideia da relação causal linear, sendo mais consistente com a ideia de configuração causal curvilínea. Ou seja, uma convergência de variáveis regidas por interações dinâmicas e interdependentes, na qual o resultado é sempre contingencial.

Se, por um lado, a estrutura de oportunidades políticas é exógena aos movimentos sociais, por outro, os insurgentes também podem, a partir de eventos históricos e datas celebradas pelo movimento, para mobilizar os participantes para ações de protesto, abrindo oportunidades políticas para si e também para outros movimentos.⁶ No caso do Movimento Negro brasileiro, a celebração dos 300 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares, configurou-se como uma oportunidade política singular para organizar e mobilizar os mais diferentes e heterogêneos grupos, coletivos e entidades para uma grande manifestação na capital federal, a fim de cobrar reformas na política racial brasileira: a “Marcha Zumbi dos Palmares, contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida”. Ao direcionar o protesto para o Estado e exigir políticas públicas de enfrentamento do racismo e das desigualdades raciais, buscava chamar a atenção das autoridades sobre a gravidade da situação, e incluí-la na agenda governamental.

Durante a audiência com os organizadores da marcha, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, anunciou a criação do Grupo de Trabalho de



Interministerial para Valorização da População Negra, que ficou conhecido como GTI. Sua finalidade era promover debates e levantar sugestões para subsidiar a elaboração de políticas para desenvolvimento social da população negra.

Para as lideranças e militantes do Movimento Negro, a criação do GTI foi fruto da pressão exercida pela marcha. Por sua vez, para os ativistas negros que faziam parte do governo, o GTI já havia sido concebido e seria criado independentemente da marcha.⁷

Qual a relação causal entre eles? De que maneira ambos os eventos contribuíram para colocar o tema na agenda governamental?

Formação da agenda: Entre fluxos e janelas de políticas públicas

Inspirado no *Garbage Can Model* (Cohen, March e Olsen, 1972), segundo o qual governos e processos de formulação de políticas públicas operam em ambientes envoltos de ambiguidade e incerteza, as preferências são inconsistentes e mal definidas, pois se ajustam ao tipo de problema que se quer solucionar, Kingdon (2014) desenvolveu o Modelo de Múltiplos Fluxos (MMF) para explicar processos decisórios em políticas públicas. Ele organiza e rotula a circulação de ideias e fatos em fluxos de problemas (*problems stream*), de política pública (*policy stream*) e da política (*politics stream*) (Birkland, 2015). Os fluxos atravessam governos nos processos de tomada de decisão.

Cada fluxo movimenta-se de maneira independente um do outro. Somente em circunstâncias especiais, nas “janelas de políticas públicas” (*policy window*), os fluxos são reunidos e as mudanças relevantes nas políticas são realizadas. Modificações de impacto só ocorrem quando há o acoplamento dos três fluxos. Fora dessas circunstâncias é quase impossível que um tema alcance a agenda decisória. Nos acoplamentos, solução encontra problema. Mas a junção dos fluxos não se faz naturalmente. Empreendedores políticos (*policy entrepreneurs*) entram em cena para unir os fluxos e provocar as mudanças.

Empreendedores políticos concentram-se em um problema específico. Examinam potenciais soluções no fluxo de políticas públicas com o intuito de vinculá-las a um problema. Eles aproveitam as oportunidades, que se abrem em alguns momentos (*policy windows*), para aprovar o seu pacote preferido de problema e solução. Para isso, tentam convencer os decisores em relação a um tipo de enquadramento de problema em lugar de outro.



As *policy windows* são oportunidades para fazer avançar certas iniciativas dentro do governo. Elas se abrem e podem permanecer assim por breves períodos de tempo. Caso os participantes não as aproveitem, deverão aguardar uma nova chance (Kingdon, 2014).

Quando e como um tópico entra na agenda governamental? A formação da agenda governamental e a especificação das alternativas são afetadas por duas categorias de fatores: atores e processos (fluxos). A dinâmica inerente a cada um dos fluxos e as interações entre os participantes definem quais itens da agenda e quais alternativas são escolhidos. Três são as formas básicas de uma questão entrar na agenda governamental: a) por transferência, itens são “transferidos” da agenda “sistêmica” (não-governamental) para a agenda “formal” (governamental) por iniciativa do governo ou por pressão política; b) difusão de novas ideias entre as elites profissionais e elites políticas; c) mudanças no controle político do governo e no legislativo (Kingdon, 2014).

Para compreender o funcionamento dessas duas categorias é necessário distinguir os tipos de agenda: a) “sistêmica” ou não-governamental; b) governamental; e c) decisória; e identificar os atores.

A criação do GTI

A instituição do GTI deu-se no mesmo dia da marcha; por isso, talvez até já estivesse pronto. É importante lembrar que a marcha começou a ser organizada em 1994. Os ativistas negros do PSDB tinham informações sobre a marcha, assim como o próprio serviço de inteligência do Estado brasileiro. Mas essas questões também não são centrais na explicação. O fato é que o modelo do GTI seguia o padrão do *Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra*,⁸ criado na gestão do governador Franco Montoro, em São Paulo, em 1984, cujos principais artífices agora estavam no governo federal.⁹ Ou seja, uma iniciativa conhecida tanto pelos ativistas e burocratas negros quanto pelos decisores brancos do PSDB.

Conforme visto, nos processos decisórios as preferências são problemáticas (ambíguas). Os participantes de um processo decisório, quando confrontados com uma situação-problema e instados a apresentar propostas, elaboram-nas de acordo com suas experiências. “O GTI, como disse, foi praticamente uma reprodução em larga escala do que a gente fez: era abrir espaço etc... e tal”.¹⁰ Ao se referir ao GTI em entrevista, o presidente Cardoso corrobora o raciocínio: “Há o Conselho dos Negros também, que o Montoro fez pioneiramente em São Paulo”.¹¹



Ambos os eventos correram em paralelo naquele ano de 1995. Eis um caso exemplar de a solução encontrar o problema quase de imediato. Embora criado no dia 20 de novembro de 1995, a instalação do GTI só se efetivou em 27 de fevereiro do ano seguinte, em ato rodeado de pompa presidencial.

O GTI foi organizado em 16 áreas, que deveriam produzir propostas e sugestões de políticas. Havia representantes de oito ministérios e duas secretarias, com oito membros indicados pelo Movimento Negro. Após pouco mais de dois anos de trabalho (fevereiro de 1996 a maio de 1998), o GTI apresentou documento final com sugestões de medidas para fomentar o progresso social e econômico dos negros na sociedade brasileira. Entretanto, o governo não criou os mecanismos para viabilizar a execução daquelas proposições. Inclusive, ministros boicotaram a implementação das recomendações do GTI (Telles, 2003).

Nos seus dois mandatos (1995-2002), o presidente Cardoso deu demonstrações de ambiguidade quanto às políticas para a superação das desigualdades raciais no país.¹² Um dos problemas enfrentados pelo GTI é que se pretendeu assumir a problemática das desigualdades raciais sem, no entanto, se desfazer da noção de democracia racial (Rios, 2012).

Tanto a Marcha Zumbi contra o Racismo quanto o GTI cumpriram seu papel de inscrever o tema das desigualdades raciais na agenda governamental, rompendo, assim, os limites de uma agenda cultural a população negra estava circunscrita. Esse debate ganhou novo ânimo e contornos após a convocação, pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1997, para 3ª CMR.

A 3ª Conferência Mundial contra o Racismo e o Papel da Cooperação Internacional

O terceiro vetor do agendamento da questão racial foi a convocação da ONU para a 3ª CMR. Esse fato fez com que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) fomentasse, inclusive financeiramente, as agências estatais brasileiras, a fim de produzirem estudos e pesquisas sobre as desigualdades raciais, de modo a subsidiar os debates preparatórios para a participação brasileira na conferência.

A cooperação internacional, por meio de organismos como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), além do Departamento para o Desenvolvimento Internacional e Redução da Pobreza (DFID), do governo britânico, desempenhou um papel fundamental para o aprofundamento e na ampliação do debate público acerca das desigualdades raciais no



Brasil. Por exemplo, além do estímulo ao IPEA, o PNUD liderou o desenvolvimento do Programa de Combate ao Racismo Institucional (PRCI) juntamente com o DFID – que atuou como órgão financiador -, firmando convênio com o Ministério da Saúde (PCRI-Saúde).

No processo preparatório para a 3ªCMR, as autoridades brasileiras, sobretudo o Itamaraty, já não mais podiam ignorar a problemática do racismo no Brasil, empenhando esforços e recursos para garantir a participação brasileira na conferência mundial.¹³ O governo brasileiro demonstrou, pela primeira vez, seriedade e determinação em resolver as questões levantadas pelo Movimento Negro (Telles, 2003).

Após a 3ª CMR, o Estado brasileiro passou a admitir a possibilidade de ações afirmativas para populações historicamente discriminadas. No imediato pós-3ª CMR, o governo federal criou o Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD), vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, cujo objetivo era suscitar a formulação de políticas afirmativas e resguardar direitos de indivíduos e grupos suscetíveis à discriminação racial (Jaccoud, 2009).

Primeiras rasuras na política racial brasileira

Entre 2001 e 2004, Heringer (2006) listou 69 iniciativas classificadas como de promoção da igualdade racial. Dessas, 23 eram iniciativas do governo federal, 21 de governos municipais e estaduais, 12 do setor privado e 11 de organizações da sociedade. O governo federal propôs, entre outras coisas, a criação de um fundo de reparação social para financiar políticas inclusivas e o Programa Nacional de Ações Afirmativas, no âmbito da administração pública. Entretanto, apenas a adoção de cotas raciais na ocupação de cargos comissionados no Ministério do Desenvolvimento Agrário e o programa de ações afirmativas do Instituto Rio Branco, destinado a incentivar o ingresso de negros na carreira diplomática, foram implementados.¹⁴ As demais iniciativas tiveram execução errática e resultados pífios (Heringer, 2006; Telles, 2003).

A partir de 2003, o tema ganha novo dinamismo. A primeira medida foi a aprovação da Lei 10.639, que instituiu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Naquele mesmo ano, foi criada a Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR).¹⁵ Naquele ano, foi apresentada a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), e seus órgãos consultivos: o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) e o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (FIPIR). Também em 2003, houve a regulamentação dos



procedimentos para reconhecimento, demarcação e titulação das terras das comunidades quilombolas (Ribeiro, 2014).

Em 2005, ocorreu a I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (I CONAPIR). Aquele ano foi declarado pelo governo federal como o “Ano Nacional de Promoção da Igualdade Racial”. Dois anos depois, ocorreu a II CONAPIR. Em 2009, a SEPPIR sistematizou as propostas das duas conferências, consubstanciando o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR), integrado ao Estatuto da Igualdade Racial - Lei 12.288, aprovada em 2010.¹⁶

Em abril de 2012, por decisão unânime, o STF julgou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais utilizado para o acesso a universidades públicas brasileiras. Vencida essa batalha no Judiciário, o governo federal encaminhou o projeto de lei que tornava obrigatória a adoção de cotas raciais no ingresso em universidades públicas federais e institutos federais de educação - Lei nº 12.711/2012.

Em 2014, o governo federal sancionou a Lei 12.990, que reserva 20% das vagas nos concursos públicos da União para candidatos que se autodeclararam negros. Esta também foi declarada constitucional, por unanimidade, pelo Supremo Tribunal Federal.

Após o período de pujança institucional, de uma produção legislativa e institucional de proposições em prol da igualdade racial, tanto o Movimento Negro quanto as instituições estatais dão mostras de perda de ímpeto.

Conclusão

Procurei desvelar as ações e interações entre Movimento Negro e o Estado brasileiro que culminaram no processo de agendamento do tema das desigualdades raciais. Chamei a atenção para o fato de que, em 1995, o fluxo do problema (Movimento Negro) se encontrou com o, de política pública (GTI), no Palácio do Planalto, no dia 20 de novembro. Todavia, o acoplamento não foi completo, pois faltou cingir o fluxo da política. A união dos três fluxos deu-se nos governos do Partido dos Trabalhadores, a partir de 2003, e com forte influência de eventos internacionais como a 3ª CMR e da ação dos organismos multilaterais vinculados à ONU.

Nesse sentido, a formação da agenda e a formulação de políticas públicas são cada vez mais influenciadas por processos que extrapolam os limites dos Estados nacionais. Convém salientar também que a conjuntura internacional, o contexto institucional e a dinâmica de interações entre os atores importam no processo de formulação de políticas públicas nacionais.



A agenda em prol da igualdade racial no Brasil procurou modificar a política racial. Não se pode negar seus avanços, porém ainda é incapaz de produzir uma mudança profunda no curso da política racial brasileira.

Notas

¹ Doutor em Ciência Política (Unicamp). Pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco.

² A Marcha reuniu mais de 30 mil manifestantes para comemorar a imortalidade de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo existente em solo brasileiro, e protestar contra o racismo, em Brasília (DF).

³ Cf. Depoimento de Ivair Alves dos Santos concedido a Alberti e Pereira (2007).

⁴ Cf. D'Adesky (2001).

⁵ O presidente da República, acompanhado por ministros, parlamentares e lideranças do Movimento Negro, participou de atividades relativas à celebração dos 300 anos de Zumbi dos Palmares, no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, Alagoas, Brasil.

⁶ “Os sindicatos e os partidos políticos de esquerda envolveram-se, à parte, num esquema próprio, e afirmo que a motivação principal era a oposição ao governo FHC, e não a luta contra o racismo. (...) Não houve unidade em 1995, havia circunstâncias conjunturais que motivaram até a presença de Lula na marcha” (Entrevista de Edson Cardoso para o site ZUMBI + 10, reproduzida em Cardoso, E. L. 2015, p. 213-222. Recuperada em www.marchazumbimais10.blogspot.com.br/2005/10/entrevista-com-edson-cardoso.html).

⁷ “Quando a Marcha Zumbi dos Palmares chegou aqui, deu a impressão de que Marcha criou o GTI. Mas, na verdade, o GTI já estava pronto. Foi uma coisa construída no governo. Não foi feita pela sociedade. O governo fez e apresentou.” Depoimento de Ivair dos Santos, concedido a Alberti e Pereira (2007, p. 355).

⁸ Cf. Hanchard, 2001.

⁹ Hélio Santos e Ivair Augusto Alves dos Santos, militantes do Movimento Negro, filiados ao MDB de São Paulo (Cf. Santos, 2007; Alberti & Pereira, 2007).

¹⁰ Depoimento de Ivair Alves dos Santos, concedido a Alberti e Pereira (2007, p. 355).

¹¹ Cf. <https://bit.ly/38ep8xe>

¹² Cf. Discursos do presidente Fernando Henrique Cardoso em: <https://bit.ly/3rRD6x7>. Ver tb. Santo (2016).

¹³ Sobre a mobilização, organização e participação do Movimento Negro na 3ª CMR, cf. Santos (2005).



¹⁴ A experiência do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi descontinuada. O Programa de Ação Afirmativa, do Instituto Rio Branco – Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia, instituído em 2002.

¹⁶ A Seppir foi criada com *status* de ministério. Em 2010, a secretaria foi transformada em ministério.

¹⁷ Sobre o processo de aprovação da Lei 12.288/2010, cf. Santos; Santos e Bertúlio (2011). Parte dos bastidores da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial pode ser vista no documentário “Raça” (2012), de Joel Zito Araújo e Megan Mylan.

Referências Bibliográficas

Alberti, V.; Pereira, A. (Eds). (2007). *História do movimento negro no Brasil: depoimentos ao CPDOC*. Rio de Janeiro: Pallas, CPDOC-FGV.

Andrews, G. (1998). *Negros e brancos em São Paulo (1888-1988)*. Bauru: Edusc.

Birkland, T. (2015) *An introduction to the policy process: theories, concepts, and models of public policy making* (3rd ed). New York: Routledge.

Cardoso, F. H. (2006). *A arte da política: A história que vivi*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Cardoso, M. (2002). *Movimento Negro em Belo Horizonte: 1978-1998*. Belo Horizonte: Mazza Edições.

Carvalho, J. M. (2005). *Forças armadas e política no Brasil*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Cohen, M., March, J., & Olsen, J. (1972). A Garbage Can Model of Organizational Choice. *Administrative Science Quarterly*, 17(1), 1-25. doi:10.2307/2392088

D'Adesky, J. (2001). *Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e antirracismos no Brasil*. Rio de Janeiro: Pallas.

Eisinger, P. (1973). The conditions of protest behavior in American cities. *American Political Science Review*, 67(1), 11-28. doi:10.2307/1958525.

Gilroy, P. (2007). Entre campos: nações, cultura e o fascínio da raça. São Paulo: Annablume.

Hanchard, M. (2001). *Orfeu e o poder: o movimento negro no Rio de Janeiro e São Paulo (1945-1988)*. Rio de Janeiro: EdUERJ.

Hanchard, M., & Chung, E. (2004). From race relations to comparative racial politics: a survey of cross-national scholarship on race in the social sciences. *Du Bois Review*, 1, 2004, pp. 319-343. doi: 10.1017/S1742058X04042067. Recuperado em



<<http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=251654&fileId=S1742058X04042067>>. Acesso em: 16-03-2016.

Heringer, R. (2006). Políticas de promoção da igualdade racial no Brasil: um balanço do período 2001-2004. In: Feres Junior, J.; Zoninsein, J. (eds.). *Ação afirmativa e universidade: experiências nacionais comparadas*. Brasília: UNB.

Jaccoud, L. et al. (2009). Entre o racismo e a desigualdade: da Constituição à promoção de uma política de igualdade racial (1988-2008). In L. Jaccoud (Eds) *A construção de uma política de promoção da igualdade racial: uma análise dos últimos 20 anos*. Brasília: Ipea, pp 19-92.

Jaccoud, L., & Begin, N. (2002). *Desigualdades raciais no Brasil: um balanço da intervenção governamental*. Brasília: IPEA.

Katznelson, I (1973). *Black Men, White Cities: Race, politics, and migration in the United States, 1900-30, and Britain, 1948-68*. London: Oxford University Press.

Kingdon, J. (2014). *Agendas, alternatives, and public policies*. 2ed. Harlow: Pearson new international edition.

McAdam, D. (1985) *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press.

McAdam, D. (1996). Conceptual origins, current problems, future direction. In D. McAdam, L. McCarthy, & M. Zald (Eds), *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge University Press.

McAdam, D.; McCarthy, J. D. & Zald, M. (Eds). (1996). *Comparative perspectives on social movements: political opportunities, mobilizing structures and cultural framings*. Cambridge University Press.

McAdam, D.; Tarrow, S. & Tilly, C. (2009). Para Mapear o Confronto Político. *Lua Nova*, São Paulo, n. 76, p. 11-48.

Mylan, M.(produtora) & Araújo, J. Z., & Mylan, M (diretores). (2012) *Raça: um filme sobre a igualdade*. Brasil – EUA. Documentário.

Pereira, A. (2008). *Trajetória e perspectivas do movimento negro brasileiro*. Belo Horizonte: Nandyala.

Ribeiro, M. (2014). *Políticas de promoção da igualdade racial no Brasil (1986-2010)*. Rio de Janeiro: Garamond.

Rios, F. O protesto negro no Brasil contemporâneo. *Lua Nova*, 85, 2012, pp. 41-79.

Rodrigues, C. (2014). Movimentos negros, políticas públicas e desigualdades raciais no Brasil e Colômbia. *Revista Debates Latinoamericano de Estudios Avanzados*, 1



- (24), p. 63-93. Recuperado de <http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/4802>
- Santos, I. (2007). *O Movimento Negro e o Estado (1983-1987): o caso do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no Governo de São Paulo*. São Paulo: Imprensa Oficial.
- Santos, M. A. (2005). *A persistência política dos movimentos negros brasileiros: processo de mobilização à 3ª Conferência Mundial das Nações Unidas Contra o Racismo*. Rio de Janeiro. 182 f. Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- Santos, S. A. dos; Santos, J.V. dos; & Bertúlio, D.L. (2011). *O processo de aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, Lei n.º 12.288, de 20 de julho de 2010*. Brasília: INESC. Recuperado de <https://acoes-afirmativas.ufsc.br/files/2013/12/Livro-Estatuto-da-Igualdade-Racial.pdf>.
- Schopenhauer, A. (2010). *Sobre Filosofia e ciência da natureza*. São Paulo: Hedra.
- Tarrow, S. *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, Alianza Editorial, 1997.
- _____. *O poder em movimento: movimentos sociais e confronto político*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
- Telles, E. *Racismo à brasileira: uma perspectiva sociológica*. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação Ford, 2003.
- Tilly, C. (2010). Movimentos sociais como política. *Rev. Bras. de Ciência Política*, 3. Brasília, pp. 133-160.
- Wade, P. (2006). Etnicidad, multiculturalismo y políticas sociales en latinoamérica: Poblaciones afrolatinas (e indígenas). *Tabula Rasa*. Bogotá - Colombia, 4, pp.59- 81.



“Nada sobre nós sem nós”: Povo de rua e a política nacional da população em situação de rua no Brasil.

Kelly Cristina Santos Morais¹

Resumo

Pretende-se neste artigo identificar o papel do Movimento Nacional da População em Situação de Rua – MNPR-, na construção da Política Nacional para essa população no país. Para isso, serão verificados no período de 2004 a 2009, através de publicações, reportagens e revisão de literatura, os caminhos que esses novos atores, pessoas em situação de rua, agindo coletivamente, percorreram para se inserirem institucionalmente no Estado brasileiro, participando diretamente das discussões inerentes a esse grupo populacional. O reconhecimento dessa luta foi materializado, por meio do Decreto nº 7.053/2009, no governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua – PNPR, normatizando a inclusão e garantindo a essa população o acesso a serviços e programas que integram as diversas políticas públicas existentes nos estados e municípios brasileiros. É importante destacar que apesar da visibilidade e reconhecimento alcançados, a arena de discussões Movimento Social e Estado, bem como as relações ali estabelecidas, guardam, em ambas as partes, tensões e conflitos, oriundos dos interesses inerentes ao MNPR, enquanto sociedade civil e aos estados subnacionais, evidenciando dessa forma a natureza dessas relações. Assim, considerando a importância da participação dos destinatários de políticas públicas e sociedade civil nas arenas de debate e implementação dessas políticas, verifica-se que não há outro caminho para a construção de espaços democráticos fora dessa perspectiva. A resistência e o trabalho do MNPR e das pessoas em situação de rua mostram isso.

Palavras chave

MNPR; Situação de Rua; Reconhecimento; Movimento Social; Estado.

Introdução

Quando um grupo comumente subalternizado pela sociedade e pelo Estado como a população em situação de rua (PSR) se reúne para defender sua inclusão nas instituições e nas políticas públicas de municípios, estados e da federação, bem como a sua participação na construção dessa inclusão, notamos a importância da atuação de



sujeitos que vivenciam a realidade denunciada para a ampliação e aprofundamento de questionamentos e pautas que atendam as especificidades do grupo representado.

A presença de pessoas com trajetória de rua nas discussões acerca da PSR é uma marca do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR). Nada sobre a população em situação de rua, pode ser discutido sem a população em situação de rua. Nessa perspectiva, o MNPR, hoje presente em 17 estados, ocupa vagas em conselhos municipais, estaduais e nacionais da assistência social, da saúde, dos direitos humanos, entre outros. O debate sobre políticas públicas e legislações específicas passam pela participação e pelo reconhecimento da PSR, representada pelo MNPR.

Os espaços ocupados foram importantíssimos para o aprimoramento de ações voltadas a essa população. Entre normas e equipamentos de atendimento específico para esse grupo, o combate aos diversos tipos de violência sofridos, inclusive de agentes estatais, destacamos a visibilidade dada a questão das ruas e o reconhecimento da luta do MNPR e do povo de rua. Apesar da resistência de agentes políticos e das tensões produzidas a partir dessa relação, movimentos identitários como o MNPR, redefiniram o modo como a esfera pública passou a gerir sua governança junto a sociedade civil, além de produzir saberes únicos, próprios dos caminhos percorridos por esses sujeitos.

O artigo se apoia em revisão de literatura, publicações e reportagens produzidas por editorial ligado à população em situação de rua – Rede Rua.

O movimento nacional da população de Rua: o protagonismo da população em situação de rua na construção da Política Nacional para a População em Situação de Rua

O Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) surgiu em 2005 como resposta às inúmeras violências sofridas pela população em situação de rua no Brasil e teve como expoente maior o assassinato de sete pessoas em situação de rua na praça da Sé em São Paulo entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004. (Rede Rua, 2005)

É, portanto, a partir desse momento que esse segmento social começa a se organizar em rede com apoio de instituições públicas, privadas e religiosas do cenário social no país. (Rede Rua, 2004) A contribuição de interlocutores valiosos e do fortalecimento da autonomia da PSR, consolidou a possibilidade de uma participação mais efetiva e democrática, além de propiciar um maior controle social da atuação dos entes federados.



O MNPR ao impulsionar a criação de uma proteção jurídica da população em situação de rua e conferir protagonismo a esse grupo populacional, transformando-os em sujeitos políticos, deu novo sentido a existência do povo de rua, deu-lhes dignidade.

Em anos anteriores, acreditava-se que esse grupo não seria capaz de se unir coletivamente em prol de seus direitos (Castel, 1998; Stoffels, 1977). De acordo com Stoffels (1977), a população de rua era vista como uma população sem força de pressão, sem força política e incapaz, portanto de protagonizar a criação de um movimento social reivindicatório de direitos.

Para Gohn (2013), abriu-se com isto possibilidades para uma participação com controle social mais efetivo, menos cooptada e menos caudatária às redes de clientelismo. As relações entre sociedade civil e Estado foram alteradas e as novas políticas sociais passam a priorizar processos de inclusão social de setores cotidianamente excluídos.

Evelina Dagnino (2004) avalia essa questão ao se referir ao *encontro* entre Estado e sociedade civil nos *espaços públicos*. Para fins de conceituação, espaços públicos podem ser entendidos como instâncias decisórias que promovem o reconhecimento e dão voz a novos atores e temas não específicos e heterogêneos. Refletem a pluralidade político-social, reconhecendo os interesses e opiniões na sua diversidade (Dagnino, 2004 apud Moraes, 2019, p.55).

Na perspectiva da negociação com o Estado nos espaços públicos (Dagnino, 2004), a pauta da população em situação de rua alcança maior visibilidade no plano federal no Brasil em 2003, quando o governo abre espaço para ouvir as suas reivindicações.

Após a criação do movimento e da aproximação do Estado desses novos sujeitos políticos, iniciam-se os debates para a inclusão institucional dessa população através do fomento de políticas públicas e legislações protetivas e não excludentes, publicizadas em documentos como no relatório do I Encontro Nacional sobre população em Situação de Rua, em 2005 e na publicação “Rua: aprendendo a contar”, de 2009. Ambos produzidos com a participação contínua de representantes da população em situação de rua e do MNPR.

Em dezembro de 2009, é assinado pelo então presidente, Luís Inácio Lula da Silva, o Decreto presidencial nº 7.053, o qual instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR) e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Foi uma conquista importante para o MNPR e para a população em



situação de rua. Materializou a “entrada” desse grupo no rol de proteção social e jurídica brasileiro.

Entendemos que somente a instituição de uma legislação não garante a efetividade da mesma, mas não podemos desconsiderar a validade da própria norma em termos de avanço infraconstitucional e, sobretudo, social. Ora, um grupo marginalizado é recebido pela primeira vez por um governo e consegue viabilizar a construção de uma política social e de programas que resgatem a dignidade de milhares de pessoas que habitam os logradouros dos grandes centros do país. Essa abertura se fundamenta na democratização do Estado, em princípios constitucionais trazidos pela Constituição de 1988 e na política social implementada nos governos Lula (2003-2011)².

Em 23 de dezembro de 2019 o referido decreto completa dez anos e a percepção é de que apesar desses pequenos avanços a Política Nacional não conseguiu atender ao grave problema da situação de rua no país. A marginalização e o preconceito são fatores determinantes para essa estagnação. Além disso, poucos municípios e estados aderiram a PNPR.³

Ademais, a política econômica adotada pelo governo do senhor Jair Bolsonaro, tem agravado a desigualdade no país, aumentando consideravelmente os índices de pobreza e o número de pessoas em situação de rua no Brasil.⁴

Aliado a isso, o governo de Bolsonaro vem desmanchando políticas públicas essenciais ao desenvolvimento social, político e econômico brasileiro implementadas desde a Constituição de 1988, desarticulando redes construídas ativamente pela sociedade civil na tentativa de desmobilizá-la.

A revogação da Política Nacional de Participação Social (PNPS) e do Sistema Nacional de Participação Social (SNPS), através do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019⁵, revelam o caráter autoritário e ideológico com que o citado presidente tem se portado à frente da administração do Estado.

Conclusão e reflexões finais

Buscou-se com essas breves reflexões verificar o papel de destaque assumido pelo Movimento Nacional da População de Rua, no período de 2004 a 2009, no que se refere à construção da Política Nacional para a População em Situação de Rua no Brasil. Sendo 2004 o ano decisivo para a organização coletiva da população em situação de rua e 2009 o reconhecimento social, político e jurídico dessa população.



Considerando a limitação do espaço deste artigo, a proposta foi apenas apresentar algumas questões relevantes à disseminação da identidade política

Notas

¹ Mestra em Estado e Sociedade pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

² O presidente Lula reunia-se anualmente com pessoas em situação de rua, catadores e representantes dos respectivos movimentos sociais na cidade de São Paulo.

³ De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), apenas três estados, além do Distrito Federal, aderiram formalmente à política: Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com o MMFDH, apenas treze municípios em todo o país aderiam à PNPR. São eles: São Paulo (SP), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Maceió (AL), Juiz de Fora (MG), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Recife (PE), Uberaba (MG), Rio Branco (AC), Foz do Iguaçu (PR), Passos (MG) e Novo Hamburgo (RS). (Morais, p.103, 2019).

⁴ https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/06/politica/1573049315_913111.html

⁵ http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137350

desses novos sujeitos e a sua trajetória de luta por visibilidade, reconhecimento e direitos.

Dessa forma, cabe concluir dizendo que a finalidade desse trabalho foi pontuar elementos capazes de identificar o protagonismo do MNPR, bem como analisar, com brevidade, a evolução das relações sociedade civil e estado, com fundamento na participação desses novos atores.

Referências

Brasil. I Encontro Nacional sobre população em Situação de Rua: relatório. Brasília, DF. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, Secretaria Nacional de Assistência Social. 2006.

_____. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome. Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação e Secretaria Nacional de Assistência Social. Rua: aprendendo a contar. Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua. Brasília, 2009.

_____. Presidência da República. Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências;



_____. Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019. Extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal. Publicado em: 11/04/2019 | Edição: 70-A | Seção: 1 - Extra | Página: 5 Disponível em: <https://bit.ly/3hMVL8k>

Castel, Robert. As metamorfoses da questão social. Petrópolis: Vozes, 1998.

Dagnino, Evelina. Construção democrática, neoliberalismo e participação: os dilemas da confluência perversa. Revista Sociológica. v. 3, n.5, p.139-164.

Outubro de 2004;

Gohn, Maria da Glória. Movimentos Sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo. São Paulo: Vozes, 2013.

Jiménez, Carla. Extrema pobreza sobe e Brasil já soma 13,5 milhões de miseráveis. El País, 2019. Disponível em: <<https://bit.ly/3927gF7>>. Acesso em: 10 de nov. de 2019.

Morais, Kelly. Democratização do acesso a direitos e luta por visibilidade: uma análise sobre o Movimento Nacional da População de Rua. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Brasil, 2019.

Rede Rua De Comunicação. O povo da rua organizado. O Trecheiro. São Paulo, nº 123, p.1, Ano XIV, 2004. Disponível em: <<https://bit.ly/3hISU0p>>. Acesso em: 10 de nov. de 2019.

Rede Rua De Comunicação. Lançamento do Movimento Nacional dos moradores de rua. O Trecheiro. São Paulo, nº135, p.3, Ano XV, 2005.

Disponível em: <<https://bit.ly/3nj0RKG>>. Acesso em: 10 de nov. de 2019.

Stoffels, Marie-Ghislaine. Os Mendigos na Cidade de São Paulo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.



Educação do campo no Brasil e a luta pelo reconhecimento de suas demandas nas agendas políticas.

Janini Paula Silva

Resumo

O presente trabalho trás ao centro da discussão questões importantes à compreensão do tema Educação do Campo no Brasil. Nosso principal foco se estabelece no entendimento do movimento da educação do campo como constituidores de identificações coletivas e políticas. A partir de então e considerando nossas reflexões a respeito do tema, objetivamos identificar os desafios que se apresentam nas relações – muitas vezes tensa – entre movimentos sociais, sociedade e Estado, para que suas demandas possam ser reconhecidas e introduzidas nas agendas políticas. Nossa discussão teórica compreende que o movimento da Educação do Campo no Brasil constitui suas identificações a partir de demandas, necessidades específicas, desejos e experiências que se desenvolvem e encontram reconhecimento nos processos de luta. Nesse caso, o alinhamento do discurso torna-se condição imprescindível para que as demandas possam adquirir força de representatividade em sua introdução nas agendas políticas. Para direcionar nossa discussão utilizaremos como aporte analítico o pensamento pós-estruturalista, fundamentando nossos estudos e reflexões na Teoria do Discurso na perspectiva de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe como opção de percurso teórico-metodológico. Acreditamos e intencionamos que por meio de nossa discussão teórica possamos fortalecer a compreensão de que a identificação que o Movimento da Educação do Campo tem constituído decorre da valorização de suas raízes, cultura, relações, tradições, território e história, mas, que se desenvolvem dentro de uma dimensão que é primeiro, política.

Palavres chave

Educação do campo; Demandas; Identificações; Agenda política; Teoria do discurso.

Introdução

O presente trabalho ao se propor discutir temas como: a constituição histórica da Educação do Campo; suas diferenças em relação à educação rural e; suas possibilidades em constituir identificações coletivas; faremos uso do pensamento pós-estruturalista, fundamentando nossas reflexões na Teoria do Discurso na concepção de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2015) como instrumento teórico-analítico para auxiliar em nossas análises. Essa pesquisa se pauta em métodos qualitativos de forma que



nossa discussão teórica permita diferentes possibilidades de leitura da realidade, conduzindo-nos a entendimentos mais precisos, mesmo que estes sejam parciais e provisórios.

Ao trabalharmos a temática da construção histórica da Educação do Campo, intencionamos mostrar a constituição gradativa que a identidade educacional e política desse movimento adquirem durante o processo de luta e experiências práticas dos movimentos sociais do campo. Desta forma, faz-se necessário compreender o caminho percorrido e os marcos históricos, que serviram de impulso para que as demandas dos movimentos que lutam por Educação do Campo adquirissem visibilidade no cenário nacional e passassem a ter representatividade nas arenas de disputa, de forma a tornar-se parte das agendas políticas.

O deslocamento do termo Educação Rural para Educação do Campo se constitui numa dinâmica que é construída historicamente, questionando as políticas assistencialistas do Estado e lutando por espaço para se colocarem como sujeitos-autores¹ de políticas públicas.

Olhar a Educação do Campo a partir da Teoria do Discurso nos permite compreender esse movimento como um significante vazio², que consegue agregar demandas de diversos coletivos a partir de articulações discursivas que buscam espaço nas fissuras da hegemonia estabelecida, para ganhar espaço social e fortalecer a luta.

A educação do campo no Brasil e sua constituição histórica

Historicamente, é possível identificar, por meio do descaso do Estado para com o campo brasileiro, que o sistema capitalista tem buscado subordinar o campo à cidade, usando como meio a desvalorização da cultura e do universo rural, subjugando o homem do campo e seu meio como vazios, tentando de forma cruel esmagar a cultura, a história e a identidade desses atores sociais.

Com a crise de 1929, a questão agrária se subordina à indústria, mesmo havendo ainda uma forte aliança nas relações entre burguesia industrial e as oligarquias rurais. A partir das décadas de 1940 e 1950 o latifúndio passa a ser encarado como obstáculo econômico e a questão agrária cresce no cenário político nacional. Porém, a partir da década de 1960, após o golpe de 1964, a questão agrária é militarizada e milhões de hectares de terras públicas são entregues a particulares (Fonseca e Mourão, 2012) marcando vários passos de um retrocesso nas lutas contra injustiças sociais e a



propriedade privada. Sobre isso, Ribeiro (2013), apoiada em autores como Alencar; Carpi; Ribeiro (1996) nos afirma que:

O golpe militar de 1964, que instaurou uma ditadura, interrompeu esse processo, destruiu organizações, perseguiu, torturou e assassinou lideranças, colocando a Contag³ e os sindicatos de trabalhadores rurais sob rigoroso controle; com isso anulou sua natureza reivindicatória que foi substituída pela assistência social (Ribeiro, 2013, p. 32).

Com o fim da ditadura militar, o país inicia um processo de redemocratização e as questões da terra voltam a marcar com força o cenário nacional. A partir da articulação e (re)organização das lutas podemos marcar historicamente o surgimento do MST, formalmente criado no I Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra em janeiro de 1984 no Paraná, apresentando como principal Bandeira “a luta pela terra”. Esse movimento implementa um processo de luta de classe, tendo bem claro o papel das organizações camponesas. Movimento que por sua atuação e organização apresentase como de maior representatividade na luta pela terra e pela educação dos povos do campo. (Caldart, 2004).

Na tentativa de resolver os problemas relacionados ao acesso a terra, atores sociais organizam-se em grupos sociais reivindicatórios, diversos coletivos - apesar das diferenças que os individualizam, articulam-se através de discursos que os identificam e singularizam suas necessidades imediatas, objetivando conquistar seus espaços e terem suas necessidades básicas atendidas. Com isso, alguns desses movimentos chegam a ultrapassar seu caráter de grupo social, e passam a colocarem-se como atores sociais de atuação política relevantes na sociedade civil, os quais chegam a tomar parte na esfera de decisões das políticas públicas, pois:

Nos conflitos sociais do campo onde predominam os conflitos pela terra já é possível se perceber que os camponeses se afirmam como classe social ou, mesmo sem o dizer, defendem o campesinato como modo de produção ao reproduzirem político-ideologicamente a assertiva de se constituírem como um modo de viver e de produzir diferente do modo de produção capitalista. (Carvalho In. Caldart; Alentejano, 2014 p.19).

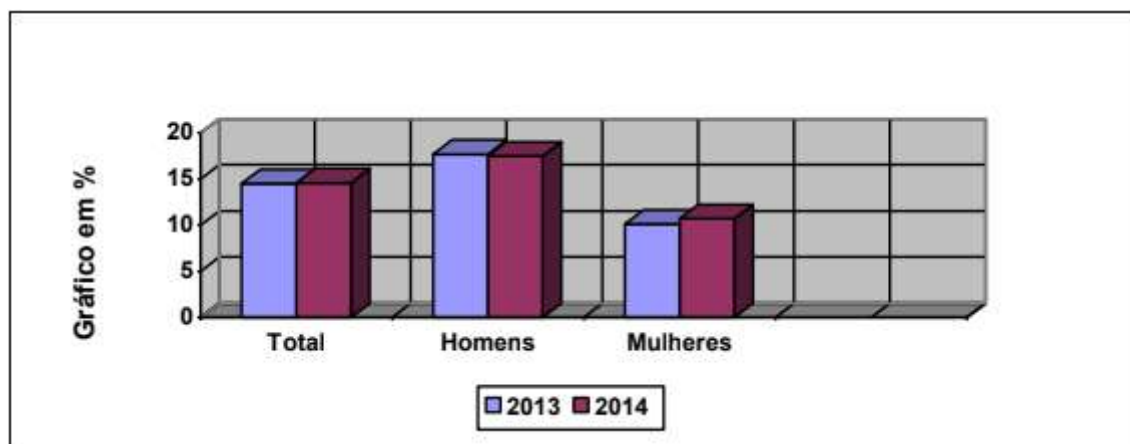
Isto significa que para a Reforma Agrária acontecer, é necessário a junção de muitos esforços, diferentes demandas precisam ser agregadas e os discursos articulados. Os conflitos no campo pela posse da terra adquirem proporções maiores, assumindo questões que ultrapassam a luta de classe e que são necessárias para que os camponeses defendam seu território e suas formas de trabalhar e produzir na terra, colocando-se em posição contra- hegemônica à lógica do capital.



Entre as décadas de 1930 e 1940 emerge um pensamento chamado “ruralismo pedagógico⁴” que concebia a necessidade de uma pedagogia diferenciada ao meio rural, defendendo a existência de uma escola que preparasse os filhos dos agricultores para permanecerem na terra, sendo esta escolarização vinculada ao trabalho agrícola e adaptada às necessidades da população rural (Ribeiro, 2012). Mas essa concepção não conseguiu ser expressiva no meio político e as razões dessa não expressividade se justificam pela “ausência de bases sólidas”. Acrescentamos ainda, que a educação adequada à área rural não é aquela que prepara suas crianças, jovens, adultos, homens, mulheres para viver no campo, e sim para viverem onde desejarem, e se escolherem permanecer no campo que sejam conscientes de sua realidade, dificuldade e possibilidades de luta e embates políticos em transformação da realidade.

Pois a Educação do Campo entende a educação como uma experiência que deve ser desenvolvida de forma integral as crianças, jovens, homens e mulheres do campo, uma educação libertadora⁵ que os leve onde quiserem e/ou desejarem, e se optarem por permanecer no campo que sejam cientes da realidade e das lutas em transformá-la.

Por meio do gráfico abaixo, podemos observar o percentual da população com dez anos ou mais em atividade agrícola no Brasil nos anos de 2013 e 2014. Números bastante expressivos e que coloca crianças a partir dos 10 anos na mesma condição de homens e mulheres adultos, ignorando sua natureza de criança. É com essa realidade que a Educação do Campo no campo brasileiro precisa trabalhar e desenvolver mecanismos para superá-la.



Percentual de pessoas em atividade agrícola, no trabalho principal, na população de 10 anos ou mais de idade, ocupada na semana de referência, por sexo – Brasil – 2013-2014.

Fonte: IBGE



De acordo com os números acima apresentados, há no campo brasileiro um expressivo quantitativo de sujeitos, a partir dos 10 anos de idade desenvolvendo atividades agrícolas e provavelmente comprometendo de forma grave sua permanência e/ou desempenho nas escolas, principalmente se esta escola não encontra metodologias para construção de um trabalho atrativo ao processo de ensino-aprendizagem desses sujeitos. Um dos caminhos encontrados para aumentar a permanência dessas crianças e jovens nas salas de aula é trazer os seus conhecimentos e experiências que são desenvolvidos em outros espaços formativos – família, comunidade, associações, movimentos sociais e também o trabalho – para dentro das escolas e valorizá-los.

Dados apresentados por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em sua Síntese de Indicadores Sociais, mostra que em 2011 a taxa de analfabetismo nas zonas rurais era de 21,2%, o dobro da média nacional e três vezes mais que o encontrado nas zonas urbanas que foi de 6,5% no mesmo ano. Esses dados refletem a dificuldade em consolidar uma educação que seja eficaz ao campo e consiga superar os fortes traços da Educação Rural. Porque apesar das normativas legais que norteiam as concepções e diretrizes da Educação do Campo, o próprio Estado, instituição a qual cabe à oferta da educação a população camponesa, ainda carrega fortemente marcado em suas formações discursivas as concepções da Educação rural.

Em julho de 1997, durante o I ENERA⁶, o MST é chamado ao desafio de levantar discussão mais ampla em relação à educação no meio rural brasileiro. No ano seguinte, a partir da I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo realizada em julho de 1998 em Goiás, nasce à expressão “Educação Básica do Campo”, mais tarde ampliando seu sentido para “Educação do Campo” a partir do II Seminário Nacional realizado em novembro de 2002 em Brasília e reafirmado em julho de 2004 na II Conferência Nacional (Caldart, 2012). Confirmando a construção histórica da Educação do Campo, os princípios que balizam suas concepções e os contrapontos que a separa ideologicamente, enquanto forma e conteúdo do que se denomina educação rural, ofertada historicamente ao campo brasileiro.

Educação do campo x educação rural: Onde habita a diferença?

A construção histórica do significativo Educação do Campo não representa apenas uma transição do que antes se compreendia por educação rural e o que hoje se compreende por educação do campo. Existe claramente a tentativa de romper com uma dada hegemonia constituída através de articulações discursivas engendradas pelo Estado e pelo sistema capitalista, no sentido de continuar controlando as regras do jogo para



alimentar um sistema que acentua as desigualdades e injustiças sociais, a desvalorização cultural e a submissão dos trabalhadores à sua exploração.

Para que novas formações discursivas⁷ possam ser originadas e conseqüentemente novas hegemonias constituídas, é necessário uma contínua redefinição dos espaços políticos e sociais. O deslocamento do discurso da Educação Rural para o discurso da Educação do Campo é um fenômeno próprio da sociedade contemporânea, que reflete a dinamicidade de processos sociais fluidos, em que outras formações discursivas podem emergir e o sentido do discurso pode ser sempre outro, se deslocando a partir do questionamento da realidade, como é o caso da Educação do Campo que contesta os princípios da Educação Rural e desloca o discurso para outra direção.

O deslocamento desse discurso envolve não apenas uma mudança de nomenclatura, ou um discurso estabelecido meramente na linguagem, ou mesmo consolidado textualmente, mas sim, aplicado também no campo da ação, um discurso tratado na forma como é entendido na Teoria do Discurso, que não se faz apenas da linguagem, mas também na ação, porque discurso é prática, e como prática não se materializa apenas na linguagem. “Isso significa, em nossa terminologia, que toda identidade ou objeto discursivo é constituído no contexto de uma ação” (Laclau e Mouffe, In Lopes; Mendonça, 2015, p. 40).

No que tange às exigências educacionais da população camponesa, é possível perceber que os filhos dos camponeses necessitam de uma maior aproximação entre trabalho e estudo, articulando a unidade familiar e o trabalho, aumentando a participação no corpo social. Essa realidade exige particularidades, principalmente no sentido de que os filhos dos camponeses ingressam no mundo do trabalho muito cedo para ajudar as famílias na agricultura, - embora nossa intenção aqui não seja naturalizar a possibilidade de ingresso de crianças e adolescentes, precocemente no mundo trabalho, essa é uma realidade presente no campo brasileiro com a qual a educação do necessita constantemente trabalhar -, isso implica em uma necessidade maior de aproximar trabalho e estudo nas relações do cotidiano e na construção do conhecimento formal. Para tanto a permanência desses estudantes nas escolas rurais depende do que esta escola tem a lhes oferecer em termos de atividades educativas práticas e que relacione trabalho, aprendizagem e produção de conhecimento.

Em confronto a Educação Rural - historicamente negada pelo Estado às populações camponesas - temos a Educação do Campo, que vem sendo constituída pelos movimentos sociais de luta pela terra, articulando a educação escolar ao trabalho



produtivo, tendo por base a cooperação. O termo Educação do Campo se constitui da preocupação em construir um novo campo teórico e que vem tomando forma historicamente, mas que tem como objetivo central diferenciar-se da educação rural que por décadas marcou/marca o campo de forma hegemônica e que atende a um discurso neoliberal em favor do capitalismo. Nesse sentido, Ribeiro (2013) apoiando-se em Fernandes e Molina (2004), nos fala que:

Contrapondo-se ao rural como negação histórica dos sujeitos que vivem do trabalho da/com a terra, esses movimentos ressignificam a si mesmos, enquanto sujeitos políticos coletivos, e à sua educação, negando o rural e assumindo o campo como espaço histórico da disputa pela terra e pela educação. Campo, portanto, não quer significar o perfil do solo em que o agricultor trabalha, mas o projeto histórico de sociedade e de educação que vem sendo forjado nos e pelos movimentos camponeses (Ribeiro, 2013, p. 41).

É a partir dessa contraposição ao rural e do questionamento a realidade imediata dos povos do campo, que os movimentos sociais do campo começam a se ressignificar, a tomar posições políticas e se colocarem como atores sociais que reclamam também o papel de sujeitos-autores de suas histórias e de sua educação, assumindo dentro do espaço social, postura de luta não apenas pela terra para produzir seu sustento, mas também educação e tantos outros direitos sociais e políticos.

Entretanto, e considerando o caráter aberto de toda sociedade, períodos de transformações se iniciam, uma vez que, velhos modelos já não contemplam novas necessidades, de forma que movimentos paralelos surgem gerando novas articulações discursivas em torno da formação de uma nova hegemonia. "... a especificidade de uma prática articulatória hegemônica é dada, em uma de suas dimensões-chave, pelo seu confronto com outras práticas articulatórias de caráter antagonístico" (Laclau, 2015, p. 189). E mais,

Para nos posicionarmos firmemente no campo da articulação, devemos começar renunciando à concepção de "sociedade" como totalidade fundante de seus processos parciais. Devemos, portanto, considerar a abertura do social como o fundamento constitutivo ou a "essência negativa" da existência, e as diversas "ordens sociais" como precárias e, em última instância, tentativas fracassadas de domesticar o campo das diferenças (Idem, 2015, p. 166).

A partir dessa perspectiva, nossas análises nos conduzem a debater o deslocamento do termo Educação Rural para Educação do Campo, trazendo uma dinâmica construída



historicamente, que reflete lutas e tensões ao questionar o Estado e suas políticas assistencialistas, posicionando os atores sociais que constituem os coletivos do Movimento da Educação do Campo, como sujeitos-autores de políticas, as quais representem cultura, identidade, história e trabalho na terra, mostrando que as políticas são resultado de correlações de forças porque é uma construção social.

Ao lutar por políticas públicas que garantam aos trabalhadores do campo direito à educação que seja no campo, no sentido do direito de ser educado onde vive e do campo refletindo o direito a uma educação pensada a partir do seu chão, da sua participação, da sua cultura e que se adéque as exigências que a Educação do Campo propõe, leva os movimentos sociais a interrogar a sociedade em relação à dívida histórica do Estado na omissão do fornecimento de uma educação de qualidade e na exclusão dos trabalhadores do campo a uma escola estruturada que contemple as relações ensino e trabalho na terra, sempre especificamente presentes na realidade de vida da população camponesa. “A Educação do Campo não é *para* nem apenas *com*, mas sim, *dos* camponeses, expressão legítima de uma pedagogia do oprimido” (Caldart, 2012, p. 261).

O esforço feito no momento de constituição da Educação do Campo, e que se estende até hoje, foi de partir das lutas pela transformação da realidade educacional específica das áreas de Reforma Agrária, protagonizadas naquele período especialmente pelo MST, para lutas mais amplas pela educação do conjunto dos trabalhadores do campo. Para isso, era preciso articular experiências históricas de luta e resistência, como a das escolas família agrícola, do Movimento de Educação de Base (MEB), das organizações indígenas e quilombolas, do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), de organizações sindicais, de diferentes comunidades e escolas rurais, fortalecendo-se a compreensão de que a questão da educação não se resolve por si mesma e nem apenas no âmbito local: não é por acaso que são os mesmos trabalhadores que estão lutando por terra, trabalho e território os que organizam esta luta por educação. Também não é por acaso que se entra no debate sobre política pública (Idem, 2012. p. 259).

Para constituir suas bases, a Educação do Campo tem se apoiando na articulação de experiências históricas de movimentos e organizações que compreendem a educação como uma dimensão que possibilita o reconhecimento, a luta e a conquista de outros direitos. Ao adentrar o debate das políticas públicas, os trabalhadores rurais e os movimentos sociais do campo questionam de forma direta a ideologia do capital agrário e o atraso que o campo tem sido submetido no curso da história brasileira. Um dos



desafios apontados a Educação do Campo e a escola é a articulação do trabalho à educação.

Educação do campo como constituidora de identificações discursivas

As concepções que envolvem o termo Educação do Campo enquanto um movimento que tem se construído e constituído historicamente, e que como já trouxemos a discussão no tópico anterior busca distinguir-se dos princípios que identificam a Educação Rural.

Desta forma, entendemos o movimento da Educação do Campo colocando-o no lugar vazio do espaço social, uma vez que, ao ser discutido num âmbito mais alargado consegue agregar demandas de diversos coletivos

– trabalhadores rurais, ribeirinhos, camponeses, indígenas, quilombolas -, através de um discurso que consegue simplificar esse espaço social. O discurso, nesse sentido, assume a responsabilidade de representar uma série de demandas particulares que representam esses diferentes coletivos. Esses sujeitos que compõe a Educação do Campo ao se identificarem com tal discurso que enfatiza suas singularidades e secundariza suas particularidades sentem-se contemplados e representados por tal projeto. Sendo necessário lembrar que esse movimento lida com relações contingentes, parciais e precárias, onde “o caráter incompleto de toda totalidade necessariamente nos leva a abandonar como terreno de análise, a premissa da ‘*sociedade*’ como uma totalidade suturada e autodefinida” (Laclau e Mouffe, 2015, p. 185).

Uma concepção que negue qualquer abordagem essencialista das relações sociais também deve afirmar o caráter precário de toda identidade e a impossibilidade de fixar o sentido dos “elementos” em qualquer literalidade última (idem, 2015, p. 167).

Para os referidos autores a noção de discurso é a base primeira para formulação de sua teoria política. Um discurso que não se faz apenas na combinação de fala e escrita, porque estes são apenas componentes externos da totalidade, mas um discurso que seja a combinação de elementos lingüísticos e extralingüísticos resultantes do processo de articulação.

Nesse sentido, percebemos que a construção discursiva é uma construção fundamentalmente política. Desta forma, a construção discursiva e também política que se desenvolve em torno do significante Educação do Campo trazendo características que não se fazem apenas na linguagem ou discurso que se esgote apenas no falado ou



no escrito, mas que se transformem em prática, em ação, uma vez que, discurso reúne linguagem e ação numa relação sistemática.

Esta totalidad que incluye dentro de sí a lo lingüístico y a lo extralingüístico, es lo que llamamos de discurso. Em um momento justificaremos esta decisión: pero lo que debe estar claro desde el comienzo es que por discurso no entendemos una combinación de habla y de escritura, sino que, por el contrario, el habla y la escritura son tan sólo componentes internos de las totalid (Laclau, 1990.p.114).

E mais,

O discurso é o resultado de uma prática articulatória. Esta, por sua vez, estabelece-se a partir da relação entre elementos (diferença), os quais, durante a articulação, passam para o status de momentos. Compreender o processo articulatório é decisivo para o entendimento da noção de que é pelo discurso – e não antes e tampouco fora dele – que as identificações sociais são constituídas. Desta forma, para Laclau, não podemos considerar grupos definidos a priori como portadores de discursos prontos, mas devemos considerar discursos constituidores de grupos específicos (Mendonça, In Lopes e Mendonça (org.), 2015, p. 76).

Os autores tentam nos fazer entender que as identificações sociais ao ser constituídas pelo discurso, esse é um processo articulatório de muita importância, para que possamos entender que o discurso resulta do processo e das práticas articulatórias. Pois de acordo com o referido autor não são os atores sociais que dão origem ao discurso, mas sim o discurso que constitui a posição do sujeito como atores sociais.

Isso implica dizer que o sentido não está na coisa, objeto, ação ou processo, que o sentido pode ser outro, pode ser transformado, a partir de sua constituição numa determinada formação discursiva (Cunha, 2013, p. 268). Por isso a Educação do Campo precisa ser entendida não apenas a partir de sua existência no campo, mas principalmente a partir das formações discursivas, que carregam concepções de um movimento historicamente constituído e que caracterizam e afirmam a existência dos coletivos que constituem esse movimento. Assim, a simples existência do terno Educação do Campo não lhe garante sentido por que não daria conta de expressar sua dimensão. “O que se nega não é que tais objetos existam externamente ao pensamento, mas antes a afirmação bastante diferente de que eles próprios possam se constituir como objetos fora de qualquer condição discursiva de emergência” (Laclau e Mouffe, 2015, p. 181).



Assim, primeiramente, para Laclau, a noção de discurso vai além de qualquer constatação meramente realista dos objetos, ou seja, não é possível afirmarmos o princípio do realismo que prevê a existência totalmente independente de nossa vontade. A simples existência de algo não exaure o seu sentido, ou seja, algo não é o que é simplesmente por existir. Nesse sentido, qualquer coisa que nomeamos, que conhecemos não é apenas algo com um nome, mas uma existência dotada de um ser. Isso quer dizer que os objetos têm, além da inegável existência material, sua dimensão de sentido (Mendonça, In Lopes e Mendonça (org.), 2015, p. 75)

De forma que, a existência do termo Educação do Campo fora das formações discursivas que o envolve não teria sentido, apenas uma existência que não representaria suas concepções e princípios e que não caracterizariam diferenças da Educação Rural. São as formações discursivas que se desenvolvem em torno de algo que atribuem sentido a esse ser no mundo, a sua existência. Ou seja,

Uma formação discursiva não é uma espécie de coleção amorfa de discursos. Ela possui uma ordem, ela é uma orientação, um sentido, e agora não em termos de significado, mas de direção para esses acontecimentos. Trata-se de um campo de Práticas. Mas a ordem que produz não se define pela distribuição homogênea e ubíqua de traços e características comuns. Como diz Foucault, trata-se de antes de uma regularidade em dispersão: o discurso define regras de produção de sentido que permitem um indefinido (embora finito) de enunciados e ações (BURITY, In Mendonça e Rodrigues, 2014, p. 67).

O que se pretende dizer é que devido às diferentes posições dos sujeitos e coletivos que envolvem nosso objeto de análise, em uma formação social pode haver diversas formações ideológicas e conseqüentemente diversas formações discursivas, porque ao aproximarmos-nos de sua realidade, identificamos seu caráter heterogêneo, que envolve sujeitos e coletivos em diferentes construções históricas.

O Movimento da Educação do Campo, constituído dos vários coletivos que se encontram legitimados no art. 1º do Decreto 7.352⁸, carrega em suas concepções uma série de demandas que vão além da luta pela terra, sua principal bandeira, mas a necessidade de outras demandas como direito a saúde, moradia digna, valorização de sua cultura, justiça social, direito de permanecer em seu chão com acesso aos recursos necessários para dele retirar seu sustento e principalmente uma educação de qualidade, que atenda aos diferentes aspectos sócio-culturais dos diferentes coletivos que se encontram institucionalizados nos documentos legais.



Considerações

A Educação do Campo ao apresentar-se como um movimento que representa diversas identidades, individuais e coletivas, precisa unir forças em torno de um discurso aglutinador para constituir representatividade suficiente frente a seu principal opressor, no caso o próprio Estado, que historicamente negligenciou direitos a população que vive no meio rural, principalmente no que tange a educação. Mesmo reconhecendo que estas identidades possuem demandas específicas, seus pontos diferenciais precisaram ser postos em segundo plano para que um ponto nodal possa ser estabelecido a partir de uma cadeia de equivalência.

Assim, o movimento da Educação do Campo, possibilita através de suas concepções, o estabelecimento de uma unidade, porém uma unidade que não se apresenta como algo positivo, mas como algo negativo, uma vez que, não é a presença da positividade que possibilita a oposição ao inimigo comum, e sim uma relação de negatividade. A unificação do discurso que representa os coletivos legalmente relacionados ao Movimento da Educação do Campo representa um entendimento oposto sobre educação - principalmente uma educação que sustente como bandeira suas demandas - em relação ao entendimento de Educação no Campo ofertado pelo Estado, que se sustenta a partir de concepções ruralistas de exploração, expropriação, subalternização, destruição de riquezas naturais e subserviência ao sistema capitalista em favor do mercado internacional.

Quando analisamos a Educação do Campo identificamos que este movimento carrega em si uma série de demandas populares. Essas demandas populares articuladas a partir de um discurso central que representa as especificidades dos coletivos que constituem este movimento e formam as cadeias de equivalência, quanto mais extensa, menos ligada às demandas particulares se fará. “Pois precisa despojar-se de conteúdos particularistas a fim de abarcar demandas sociais muito heterogêneas. Isto é, a identidade popular funciona como um significante que tende a ser vazio” (Ibidem, 2013, p. 154). O que nos leva a perceber que se determinado grupo, coletivo, indivíduo, traz objetivos específicos, mas que são fracos politicamente, precisam inscrever suas demandas junto a ações de grupos maiores para ganhar força.

Em nosso entendimento o movimento da Educação do Campo assumiu esse lugar vazio do espaço social, apresentando-se como uma identidade que viria a representar o universal num determinado contexto histórico, mesmo considerando suas fissuras e impossibilidade de fechamento, porque seus efeitos são contingentes, parciais e



precários. Os coletivos que constituem a Educação do Campo perdem parte de suas características particulares e aglutinam-se entorno de um discurso capaz de articular suas diferenças, esse discurso consegue unificar as insatisfações dispersas pelo antagonismo⁹ e através de palavras e ações que transferem materialidade ao discurso, a Educação do Campo assume o lugar vazio do espaço social transformando-se num significativo vazio. Porque apesar dos particularismos que diferenciam suas lutas e reivindicações percebemos o estabelecimento de certo nível de homogeneidade de equivalências.

Notas

¹ Por sujeitos-autores, faremos uso dessa expressão ao longo do trabalho, sempre que desejarmos fazer menção aos coletivos que compõem a Educação do Campo, e que se encontram legitimados no Decreto nº 7352 de 2010, entendendo-os como sujeitos dinâmicos que desejam e lutam para incidir na formulação das políticas públicas e serem autores de seu processo educativo.

² Algo impossível de ser alcançado, mas que, em um contexto específico, é preenchido por um conteúdo que abarca outros conteúdos além de sua particularidade e que preenche provisoriamente um vazio constitutivo.

³ Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.

⁴ Corrente de pensamento em defesa de uma educação diferenciada que fornecesse subsídios para fixar o homem no campo por meio da pedagogia.

⁵ Educação de caráter libertador e não domesticador, como modelo tradicional de educação. Práxis educativa capaz de libertar o homem de toda situação de opressão, através da libertação de sua consciência, tornando-se sujeito crítico e reflexivo capaz de transformar sua realidade. (Paulo Freire).

⁶ I Encontro dos Educadores e Educadoras da Reforma Agrária.

⁷ Noção básica da Análise do Discurso que permite compreender o processo de produção de sentidos e sua relação com a ideologia, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica, constituindo um sentido e não outro para aquilo que o sujeito diz.

⁸ Decreto que institui o PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária

⁹ É uma relação negativa em que certa identidade tem sua existência negada por outra identidade no sentido absoluto do termo. Uma idéia que pressupõe a incapacidade da completude identitária, marcado por uma constante luta por posições e recursos de poder e de reconhecimento. Ao mesmo tempo em que, o discurso antagônico nega a



existência do outro, ele a constitui e da mesma forma que o antagonismo é a condição de impossibilidade de determinado discurso ele é a sua própria condição de possibilidade, porque no contexto da Teoria do Discurso, não há discurso político que se constitua senão negativamente num primeiro momento. Ver Daniel de Mendonça – Pensando (com Laclau) os limites da democracia.

Referências

Brasil. Ministério da Educação (BR), Conselho Nacional de Educação. Decreto Nº 7.352, de 04 de novembro de 2010: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Pronera. Brasília (DF); 2010.

Burity, Joanildo Albuquerque. Discurso, política e sujeitos na teoria da hegemonia de Ernesto Laclau. In Daniel de Mendonça, Léo Peixoto Rodrigues (organizadores). *Pós-estruturalismo e teoria do discurso: em torno de Ernesto Laclau*. 2. ed. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014.

Caldart, Roseli Salete. *Pedagogia do Movimento Sem Terra*. 3ª edição. São Paulo: Expressão Popular, 2004.

_____, Roseli S. Educação do Campo. In Roseli Salete Caldart, Isabel Brasil Pereira, Paulo Alentejano e Gaudêncio Frigotto (organizadores). *Dicionário de Educação do Campo*. 2ª ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.

Carvalho, Horácio Martins. As lutas sociais no campo: Modelos de produção em confronto. In Roseli Caldart, Paulo Alentejano (orgs.). *MST, universidade e pesquisa*. 1ª ed. São Paulo: Expressão popular, 2014.

Cunha, Kátia S. *A teoria do discurso como abordagem teórica e metodológica no campo das políticas públicas*. Estudos Políticos, 2013/02, nº 7, pp 257 – 276.

Fonseca, Rosa Maria; Mourão, Arminda Rachel Botelho. A educação do campo: uma realidade construída historicamente. In Ghedin (organizador). *Educação do Campo: epistemologia e práticas*. 1ª Ed. São Paulo: Cortez, 2012.

Gohn, Maria da Gloria. *Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo*. 7ª ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2013.

Laclau, Ernesto (1935-2014); Mouffe, Chantal. *Hegemonia e estratégia socialista: por uma política democrática radical*. / Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Tradução de Joanildo A. Burity, Josias de Paula Jr. e Aécio Amaral – São Paulo: Intermeios; Brasília: CNPq, 2015. (Coleção Contrassensos).



_____. Entre a equivalência e a diferença: notas sobre a trajetória teórico- política de Ernesto Laclau. In Lopes e Mendonça (organizadores). *A Teoria do Discurso de Ernesto Laclau*. 1ª ed. São Paulo: Annablume, 2015.

_____; Mouffe, Chantal. *Posmarxismo sin pedido de desculpas*. In: Laclau, Ernesto (Orgs.). *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nuevas Visión, 1990. P. 111 – 148.

Mendonça, Daniel. Pensando (com Laclau) os limites da democracia. In Lopes e Mendonça (organizadores). *A Teoria do Discurso de Ernesto Laclau*. 1ª Ed. São Paulo: Annablume, 2015.

Ribeiro, Marlene. Educação Rural. In Roseli Salete Caldart, Isabel Brasil Pereira, Paulo Alentejano e Gaudêncio Frigotto (organizadores). *Dicionário de Educação do Campo*. 2ª ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.

_____, Marlene. *Movimento camponês, trabalho e educação: liberdade, autonomia, emancipação: princípios/fins da formação humana*. 2ª Ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013.



Os coletivos como nova forma de ação social na região nordeste do brasil.

Iara Cavalcante de Melo¹
Francisco Mesquita de Oliveira²

Resumo

Os coletivos são uma nova forma de mobilização de pessoas que atuam na região Nordeste do Brasil e na sociedade, nas universidades e no meio digital. Discutem temas relacionados a marcadores sociais de diferença, de gênero, de raça, educação, sexualidade e classes. Alguns autores os caracterizam de grupos fluidos, fragmentados, sem liderança, diferenciados, autônomos e sob a influência de ideias anarquistas e libertárias (Gohn, 2017; Maia, 2013; Augusto, Rosa E Resende, 2016), os afastando do Estado, partidos políticos e dos novos movimentos sociais. O objetivo deste trabalho é contribuir com a compreensão desses coletivos, sua organização, os sujeitos que os compõe e sua relação com a sociedade. A hipótese sustentada é a de que os coletivos são novas formas de ação ou extensões de movimento social travestidos de novo. No âmbito dos novos movimentos sociais, discute-se sobre ações coletivas a partir de Laclau (1986; 2011), Melucci (1989; 2001), Santos (2010) e Gohn (1997). Nas questões de identidade e cultura, fundamenta-se a análise em Hall (2012), Castells (2001) e Giddens (2002). A pesquisa utiliza metodologia qualitativa, com a técnica de entrevista semiestruturada na coleta de dados empíricos. Assim, observa-se nos Coletivos uma relação entre elementos velhos e novos, como possível consequência da transição entre a passagem da modernidade à pós-modernidade contemporânea, e a necessidade de construção de novos paradigmas epistemológicos que explique a complexidade da sociedade pós-moderna.

Palavras chave

Coletivos; Ações Coletivas; Movimentos Sociais; Nordeste. Estado.

Introdução

A sociedade em rede que emana no século XX influencia as relações sociais na vida privada e pública, penetra no âmbito cultural e indenitário como jamais visto e transforma-se em novas tendências. Mudanças essas tem sido estudada por diferentes paradigmas teóricos explicativos, dentre eles o da pós-modernidade que traz reformulação de conhecimento e questões a partir de novas perspectivas, afastando-se



das exigências do iluminismo e se aproximando de construções mais reflexíveis e pragmáticas (Laclau, 2011; Santos 2013).

Em conjunto com essas mudanças se observam um crescimento de experiências de identidades coletivas que confrontam a globalização em seu aspecto universal e lutam pelos particularismos e singularidades culturais. Isso se dar pelo fim do sujeito global, à morte do sujeito único, características de transição entre os paradigmas modernidade e pós-modernidade (Laclau, 1986; Hall, 2019). Laclau, afirma ser este um dos avanços fundamentais nas Ciências Sociais nos últimos anos, as subjetividades de cada sujeito vierem à tona como marcas indenitárias significativas na formação da ação, tornando-se impossível falar de agente social como algo unificado e homogêneo. Hall (2019) observa que o sujeito do Iluminismo, visto como uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando em identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno. Esse cenário possibilita o surgimento de acepções múltiplas, espaço propicio a movimentos reativos que lutam na resistência em defesa da nação, etnia, família, território, sexualidade e direitos sociais.

A dinâmica das relações sociais resulta em novas formas de organização na sociedade atual, uma delas que ganhou visibilidade por conta da fluidez e presença em quase todo país, são os “coletivos”. O termo “coletivo” não é novo e muitas vezes foi designado para conceituar grupo de pessoas. O uso desse termo se tornou recorrente na literatura sobre movimentos sociais, mas quando se trata de agrupamentos ele tem sido referenciado a um tipo de organização específica que se distancia das formas tradicionais de movimentos e atuações políticas.

Algumas características relacionadas aos coletivos remetem à sua dimensão organizacional. São menos estruturados, não apresentam divisão interna, não possuem lideranças, recusam representação formal e são autônomos (Borelli; Aboboreira, 2011; Maia, 2013; Augusto; Rosa; Resende, 2016; Gohn, 2017, Perez; Souza, 2017; Lima, 2018). Os coletivos classistas, objeto desse estudo, mostram algumas características contrárias as observadas pelos analistas; esse tipo de coletivo apresenta uma divisão interna entre secretariados, possuem ramificações em diversos estados, seguem diretrizes do coletivo que tem o mesmo nome, mas é tido como “representante nacional”, se relacionam com outros coletivos e outras formas de ações coletivas tradicionais. Essas divergências de características demonstram a necessidade de se ampliar a compreensão sobre os coletivos, visto que muitas análises não levam em consideração



as particularidades apresentadas a nível organizacional e estratégico que cada coletivo apresenta, dependendo dos marcadores sociais da diferença que os identificam.

A partir do pressuposto de que há dificuldade em analisar os coletivos exclusivamente pela óptica dos movimentos sociais, visto que na literatura coletivos seriam diferentes de movimentos sociais, é importante observar que muitos coletivos não adotam as mesmas pertinências já utilizadas por outros tipos de movimento social clássico, como: pautas, demandas social específica e objetivos semelhantes aos de classe social, governo, participação e os participantes também não estão inseridos em outras formas clássicas do tipo movimento estudantil, sindical e partidário.

Considerando estes aspectos, questionamentos: como os coletivos, na região Nordeste do Brasil, que tratam de questões governamentais, de classes, de mobilização política se relacionam com o Estado, sociedade e movimento social? Como eles se estruturam e que tipo de ação desenvolvem? Quem são as pessoas que os constituem? São estas as questões que este estudo, resumidamente, busca responder.

Problematizando os coletivos

Os coletivos têm sido estudados na ótica da autonomia, com autonomia em relação ao Estado e as formas tradicionais de ação política (partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos). Para muitos autores, esse distanciamento e descrença das formas tradicionais de organização seria a justificativa de sua proliferação na sociedade.

A descrença nas instituições e nos meios participativos, frutos do modelo de democracia representativa, faria com que esses atores se agrupassem de forma totalmente diferente das organizações tradicionais existentes. Essa crise de credibilidade na relação Estado e demais formas de associação, deve-se também à abertura do Partido dos Trabalhadores (PT) à participação de vários membros de movimentos sociais na gestão de órgãos do Estado (Abers e Von Bülow, 2011; Tatagiba, 2014). As expressivas manifestações de junho de 2013 foram o resultado da insatisfação de parte da população com temas sociais e com a política institucional que os movimentos tradicionais, em parte, pactuavam com o governo petista (Gohn, 2017; Alonso, 2017).

As manifestações demonstraram o desejo de parte dos sujeitos se distanciarem da política parlamentar, as massas ansiavam pelo exercício de política sem mediações institucionais e se distanciavam dos partidos políticos (TATAGIBA, 2014). Os coletivos, nesse contexto, firmam-se num cenário de organização que não aceita vínculo com



partidos políticos, sindicatos, igrejas, movimentos sociais, seguem a lógica da autonomia e liberdade.

Essa lógica de organização não existiu apenas nas manifestações de junho de 2013, ela continuou como base de formação e construção de agrupamentos, posteriormente denominados de coletivos. Mas desde os coletivos estudados por Mesquita (2008), e depois por Peralva (2017), Gohn (2017) e Lima (2018) demonstram o afastamento de formas organizacionais tradicionais.

Outro aspecto desses estudos é o perfil jovem dos participantes, a maioria é composta por jovens. A juventude contesta práticas e valores estabelecidos por meio de suas atitudes, e isto se deve ao nível de escolaridade dos jovens, seu idealismo e informações na internet (Peralva, 2017). Eles passaram a participar mais ativamente e a sentirem-se seguros em contestar a ordem social, econômica e política, isso resultando num certo esvaziamento de movimentos de representação estudantil e movimentos tradicionais (Mesquita, 2008).

Atualmente os jovens estão mais instruídos, imersos num cenário de competição e incertezas, proposto pelas transformações do capitalismo contemporâneo que ocasiona preocupação demasiada com o futuro. Assim, eles se lançam em movimentos que buscam construir vidas autônomas, por meio de formas singulares coletivas que fujam dos costumes associados e cláusulas totalizantes da modernidade (Santos, 2013; Augusto, Rosa e Resende, 2016).

As universidades, especialmente públicas, transformaram-se em ambientes propícios às discussões sobre identidade, sexualidade, raça, política e transformações sociais. Perez (2018) afirma que os coletivos universitários são formados por estudantes de ensino superior que atuam nas universidades, diferenciam-se dos coletivos de artes por discutirem identidade de grupos e proporem ações que desconstruem preconceitos e padrões estabelecidos.

Nos centros universitários também se formam os coletivos ligados a partidos políticos e/ou movimentos estudantis, tais coletivos se mostram peculiares, formados por jovens universitários atuantes nas demandas dos estudantes e/ou bandeiras partidárias. Além de parte deles expressarem relação com partidos, os coletivos com direcionamento a partidos políticos e movimentos estudantis utilizam páginas na internet para lançar críticas a outros partidos (Souza; Perez, 2017).



A contestação dos jovens e as táticas de resistência ao domínio do capital, bem como a não crença na luta institucional burocratizada tem possibilitado aos jovens a se organizarem de forma horizontalizada, sem a ideia de um líder (Borelli, Aboboreira, 2011; Maia, 2013; Gohn, 2017; Melo; Perez, 2017; Peralva, 2017; Lima; Schmitz, 2017; Assis, 2018; Marques; Marx, 2019; Penteado e Oliveira, 2019).

As redes sociais na articulação de ação coletiva, a partir do uso de novas tecnologias da informação, são ferramentas de ação e organização de coletivos. A forte presença de coletivos nas redes sociais digitais demonstra a relação dessas novas organizações e o mundo digital (Maia, 2013; Gohn, 2017). Na pesquisa de Souza & Perez (2017) sobre coletivos com páginas na internet encontrou setecentos e vinte e cinco páginas, isso demonstra a existência de coletivos nas redes sociais. A partir dessa busca constataram que a maioria das páginas de organizações que se intitulavam de coletivos foram criadas a partir de 2012, após o início dos protestos globais que serviram como um novo modelo de ativismo com início em 2011 (Alonso, 2017).

Um coletivo pode discutir e se forma a partir de mais de um marcador social de diferença, essa heterogeneidade demonstra diferentes identidades e dificuldades dos participantes desse tipo de organização em lidar com temas específico. A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido abordada como uma interseccionalidade dos marcadores sociais da diferença assim os coletivos promovem debates de clivagens sociais atentos a interseccionalidades das mesmas (Perez, 2017).

Essa fluidez diferencia os coletivos dos movimentos sociais, o deslocamento entre diversas demandas sociais faz com que os coletivos não apresentem claramente uma agenda ou projeto político, como expressou Lima (2018) quando analisou os coletivos negros participantes do Encontro Nacional Universitário da Diversidade Sexual (ENUDES).

Entre todos os coletivos aqui discutidos, este estudo centra naqueles que atuam em questões políticas, governamentais, discutem categorias profissionais, de classe, questões de participação e formas de ação em busca de políticas públicas, podendo se relacionar com outros atores como movimentos estudantis, partidos políticos, sindicatos, e sujeitos sociais. Essa escolha se justifica no recorte da crise social e política brasileira no ano de 2013³, onde surgiram grandes manifestações populares contra o Estado. Alguns coletivos se fizeram presente e foram fundamentais no andamento das manifestações, a partir daquele ano se tornaram alternativa de organização para discutir, refletir e até mesmo exigir ações por parte do Estado.



Os coletivos do tipo classista se apresentam como um subtipo de coletivo e tem em suas pautas as questões de classe. A palavra classe, em seu sentido social, indica grupos amplos, entre os quais a distribuição desigual de bens econômicos e/ou a divisão preferencial de prerrogativas políticas e/ou diferenciação discriminatória de valores culturais implicando na exploração econômica, opressão política e dominação cultural. Os coletivos do tipo classista ajudam a compreender a importância dos coletivos, seu grau de atuação e são ferramentas de mudança política social.

A existência de coletivos de viés classista confrontando-se com as características de estudos anteriores que apontam elementos como apartidarismo e anarquismo nos coletivos. Esses coletivos se apresentam como um fenômeno social em expansão na atualidade, presente no Brasil e na região Nordeste, locus de estudo deste trabalho.

Dentre todas as características apontadas pela literatura sobre coletivos, sobressai a de agrupamento como nova forma de organização se proliferando no Brasil com adesão da juventude. Mas, ações coletivas de movimentos sociais são ações que estão em constante mudança, essa mutabilidade se refere a novos modos de interação que surgem e se adaptam no espaço-tempo pós-moderno. Os grupos possuem aspirações emancipatórias, por um lado, e processo de regulação, por outro, o equilíbrio entre essas duas perspectivas constituiu o projeto da modernidade que persiste até hoje. Mas, os movimentos sociais tradicionais continuam na lógica entre a reprodução de uma ordem social e as possibilidades de processo (re)construção social (Mutzenberg, 2002; Santos, 2013).

A escolha metodológica

Para compreender os coletivos classistas que atuam na região Nordeste do Brasil, como se organizam, qual sua relação com a sociedade, com o Estado, com partidos políticos e com sindicatos e movimentos sociais, a metodologia qualitativa é adequada pela capacidade de adentrar no campo subjetivo, nas experiências individuais e coletivas dos sujeitos. A primeira etapa metodológica desse estudo constitui pesquisa exploratória, realizada no segundo semestre de 2018, por meio da *internet*⁴, cujo objetivo foi mapear os coletivos que continham em suas discussões questões de classe e eram atuantes no Nordeste. A partir dessa pesquisa foram encontrados 26 (vinte e seis) coletivos no Nordeste, sendo que 06 (seis) deles apresentaram pautas de viés classista, relacionada com outros marcadores e organizados em campos universitários⁵, cujos componentes eram estudantes.



Nos 06 (seis) coletivos com pauta classista foram entrevistados membros e aplicada à técnica de *snowball*, também divulgada como *snowball sampling* (Bola de Neve). Essa técnica é uma forma amostral não probabilística, em que são localizados participantes iniciais e esses indicam novos participantes do mesmo tipo de grupo até a atingir o “ponto de saturação”, ou seja, os mesmos sujeitos começam a se indicarem (Biernacki & Waldorf, 1981). A técnica é recomendável para rastrear grupos, pois os sujeitos entrevistados não são definidos *a priori*, mas sim empiricamente pela indicação dos seus colegas. Assim, precedemos nesta pesquisa.

A entrevista aplicada foi semiestruturada. O roteiro semiestruturado conta com questões de definição dos coletivos, criação, organização, ações praticadas, demandas solicitadas, relação com o Estado e outros tipos de instituições e questões políticas. Dentre os coletivos encontrados na pesquisa exploratória e com a aplicação da técnica de *snowball*, somam-se 15 (quinze), espalhados pelos 9 (nove) estados da região Nordeste. Dos 15 (quinze) coletivos foram entrevistados um integrante, maior de 18 anos, como os coletivos se apresentam organização horizontal, sem hierarquia e líder, sendo assim qualquer integrante do grupo *a priori* está apto a responder questões, razão pela qual se procedeu com a seleção aleatória do entrevistado.

Nesse artigo, apresentamos, parcialmente, análises das cinco primeiras entrevistas de membros de cinco coletivos da região Nordeste, dos estados do Maranhão, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas.

O que são e o que fazem os coletivos no Nordeste do Brasil

Como já apresentado, a literatura produzida sobre os coletivos aponta características diferenciadoras para neste tipo de organização, são grupos autônomos, discutem múltiplas pautas e buscam distanciamento do estado e de outras formas tradicionais de organização. Mas será que essas características estão presentes em todos os coletivos que se constituem no Nordeste? Vejamos o dizem os representantes dos coletivos entrevistados.

DEFINIÇÃO DE COLETIVO E CARACTERÍSTICA DA ORGANIZAÇÃO					
	Maranhão	Piauí	Pernambuco	Alagoas	Rio Grande do Norte
Por que se chama coletivo?	nós nos entendemos enquanto coletivo a medida em que nos integramos nossas particularidades, compartilhando as mesmas inquietações em torno do que nos aproxima	não queremos o individual, quero andar juntos, em coletivo, pois o bem de todos é muito importante e quando estamos juntos tudo fica mais fácil.	A gente escolheu coletivo porque a gente queria trazer o sentido de grupo mesmo, de união, de coletividade, como a própria palavra sugere.	Porque é um grupo que abrange um quantitativo de pessoas.	A ideia era criar um coletivo de estudantes que não tivessem teoricamente uma aproximação do partido apesar de ser criado por pessoas do partido, mas que qualquer pessoa pudesse se organizar nesse coletivo e organizar algumas pautas."
O que entende por coletivo?	Algo que une pessoas conectadas por algo em comum, sem necessariamente haver um fim de interesse econômico.	Temos entre nós a confiança política e isso faz com que a gente se reúna em coletivo.	Um grupo capaz de se auto organizar, independente, que tem como norte principal o consenso entre seus membros.	Um coletivo se forma quando pessoas entram em consenso em se unir almejando algo em comum.	É uma ideia de construção coletiva muito forte.
Qual trabalho a organização realiza?	Fomentamos a inserção de mais mulheres no meio cultural e no contexto do espaço público como um todo, tendo como fundamento a necessidade de romper com desigualdades de gênero dentro da música.	A gente tem à frente do movimento de moradia, a frente do movimento estudantil.	Trabalhos muito voltados para a formação, o debate sobre a relação e classe e raça.	Tentamos disputar a consciência de classe de pessoas da classe trabalhadora, principalmente de mulheres das classes mais pobres, com a finalidade de conquistá-las para a luta coletiva.	Um coletivo de estudantes muito pautado na luta pela assistência estudantil das universidades e IES, além de lutar por bolsas, o bom funcionamento do RU.
Quais as ações desenvolvidas pelo grupo?	Criamos espetáculos, encontros culturais com linguagens artísticas diversificadas, rodas de conversa, oficinas de instrumentos para mulheres e participação em eventos de cunho social.	A gente constrói o DCE da UESPI, da UFPI e estamos inseridos em várias coisas como Núcleo Marielle Franco, enfim, participamos da construção de vários espaços.	Muitas rodas de diálogo, muitas rodas de formação dentro da universidade, nas bibliotecas públicas daqui de Recife.	Participamos de atos públicos em todo o estado, realizamos cursos de formação sindical e atividades de formação interna para o coletivo.	Muitas rodas de conversa, principalmente ao que diz respeito ao trabalho de base nos centros acadêmicos.
Como são tomadas as decisões no grupo?	Utilizamos como meio mais urgente de articulação, um grupo de Whatsapp, onde todas as integrantes do grupo estão (hoje somos 35 no total), lá colocamos as pautas a serem debatidas e realizamos as escolhas por meio de votação.	A gente tem as coordenações que pegam os informes nacionais e trazem para os estados, e aí os estados em reuniões gerais com todas as pessoas ou com as setoriais, conversam e tomam as decisões.	Tentamos estabelecer pautas para ter uma organização sobre o que vamos conversar, e o processo é muito consensual.	É deliberada por meio do centralismo democrático, em que todas discutem coletivamente e o que é consenso entre a maioria é acatado.	Geralmente fazemos plenárias, assembleias, para que a gente decida coisas pontuais, rápidas, as soluções precisam ser apresentadas realmente de forma consensual.

Quadro 1. característica dos coletivos
Fonte: elaboração dos autores, 2019.

As respostas as questões acima ajudam a compreender por que as pessoas se organizam em coletivos e os tipos de ações que desenvolvem. No quadro 1 se observar



que a escolha e a compreensão do vem a ser “coletivo” está diretamente relacionado a ideia de união, integração, consenso, discussão de particularidades.

A necessidade de compartilhamento e afinidade entre os integrantes dos coletivos apresenta as mutações que o sujeito pós-moderno tem enfrentado: fim da ideia de um sujeito único, universal, com espaço à heterogeneidade, particularismos e interseccionalidade em diferentes questões. A forma como tomam decisões demonstra que têm como base as discussões de classe no Nordeste, frisam e objetivam a deliberação de suas questões por meio da participação de todos os componentes que formam o coletivo. O diálogo e o consenso são para eles algo essencial, e, é visto como “democrática” essa dinâmica interna.

Criação e organização dos coletivos nordestinos

Saber quando começaram, por que se organizam, quem são as pessoas que formando essas organizações nos ajuda a entender a realidade política e social da região Nordeste e conseqüentemente do Brasil. No quadro 2 é possível observar que a maioria dos coletivos foram criados a partir do ano de 2014, um reflexo das manifestações que aconteceram em junho de 2013. A descrença nas instituições e nos meios de participação existente levaram a expansão desse “novo tipo” de organização.

Anexo 1: Quadro 2

Com relação a quantidade de pessoas, os cinco coletivos apresentam um número reduzido de participantes se comparados com movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos. Essa redução corrobora com a característica de fluidez já apontada nos estudos aqui mencionados. Os próprios entrevistados afirmam não existir uma “quantidade fixa” e há tendência de variação a cada encontro.

Relação com a sociedade, Estado e formas tradicionais de organização

Uma das características centrais dos coletivos em que a literatura os relaciona como algo novo e inovador é o desejo de afastamento do Estado e demais formas tradicionais de ação política. As discussões que envolvem questões de classe sempre estiveram presentes nos espaços tradicionais de participação, como sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais tradicionais. Atualmente é perceptível o deslocamento dessas questões e a soma a outras marcadores sociais da diferença sendo discutidas pelos coletivos.

No quadro 03 é possível perceber que não existe um total afastamento dos coletivos e de formas tradicionais de ação política nos coletivos estudados, existe participantes

filiados que participam ativamente em partidos políticos, existe coletivos que são ligados diretamente a partidos políticos, existe um trabalho em conjunto com diversos movimentos sociais e os próprios participantes acham importante essa integração com diferentes tipos de organizações.

	Maranhão	Piauí	Pernambuco	Alagoas	Rio Grande do Norte
Qual importância do coletivo para a sociedade?	Temos levantado algumas questões importantes no que diz respeito não só do espaço da mulher no meio musical e cultural, mas também da importância da discussão da presença da mulher na sociedade, na esfera pública.	Atuamos na questão da classe estudantil, questão de bolsas, cotistas, preconceito na faculdade, então a gente leva essas discussões pro meio acadêmico para que haja uma reflexão, e a gente sempre está tentando se inserir na sociedade.	O coletivo se torna essencial, a criação do Afronte que trata das questões de raça e classe surgiram outros coletivos, uma expansão da mentalidade.	Lutar pela emancipação humana, disputar a consciência de classe das pessoas, almejar a destruição de um sistema que explora, marginaliza e extermina vidas.	Acho muito importante pra gente ter a desconstrução da visão política, principalmente por construirmos um discurso acadêmico acerca dessa questão, mas ao mesmo tempo questionamos algumas realidades que a gente vê.
Coletivo tem contato com Movimentos Sociais?	Sim, estamos frequentemente em contato com movimentos e	Temos contato com a A.J.C, com o Correnteza, com a JADE que é um	A gente tem com a Rede de Mulheres Negras, com o	Sim, mantemos contato direto com o Movimento dos	Quizomba tem uma relação muito forte com alguns
	causas nas quais acreditamos, tais quais as frentes quilombolas, indígenas, LGBTQ+, feministas, frentes à favor da educação, entre outras.	coletivo do PT, a gente tem contato com vários coletivos, vários movimentos sociais.	Fórum de Juventude de Pernambuco, com os mandatos parlamentares, pessoal aqui do município que são os mandatos que mais se encaixam a nossa ideologia, nosso trabalho.	Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), a Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA), o Movimento Por Uma Universidade Popular (MUP) e outros.	movimentos que contemplam a Frente Popular, e além disso alguns movimentos de moradia como o MST, e a gente participa de intervenções.
Qual importância da relação com outros tipos de organização?	Somos um grupo composto por mulheres "militantes" logo esse contato com demais movimentos sociais é basicamente inevitável.	Como temos frequentadores da esquerda, a gente faz com que cada vez mais a gente se movimente de forma unitária, juntos por um mesmo ideal.	Trabalhar em rede é essencial, a gente não consegue se manter sem dialogar com outros movimentos sociais, com outras lideranças.	É necessária uma união e articulação da esquerda como um todo, principalmente diante de um cenário de ataques aos direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora e tantas perdas como tivemos nos últimos tempos.	Ocorrem alianças de forma que fique interessante, e existe esse diálogo constante, até mesmo com movimentos que temos certas discordâncias em algumas pautas.
Membros do coletivo fazem parte de algum partido político? O coletivo é ligado a algum partido político?	Não, somos um grupo que se preza apartidário, tendo como bandeira comum a luta pela igualdade de direitos, o respeito à diversidade, acesso democrático à cultura.	Sim, principalmente de partidos de esquerda.	Acho que nenhum membro do coletivo faz parte de partido político, eu só faço parte de um mandato. A gente participa de atividades promovidas pelos partidos.	Sim, o coletivo é ligado à frente do Partido Comunista do Brasil (PCB).*	Sim, alguns membros são filiados do PT e todos se organizam na tendência interna chamada democracia socialista, que foi fundada desde o nascimento do PT.
Você acha positivo o coletivo se inserir nessas questões políticas?	É de grande importância fazer parte dos centros de discussão de pautas que impactam o meio em que vivemos.	Muito importante pois impulsionaria o nosso trabalho. Nós temos uma ex-integrante hoje é deputada estadual e ela nos representa, ajuda das ações do coletivo.	Lutar por esse espaço sendo um coletivo da sociedade civil é algo que a gente não consegue, a gente quer sair da esfera institucional e ir para periferia e comunidades.	Sim, precisamos ocupar todos os espaços*.	Com certeza, um coletivo conseguir adentrar esses espaços para criar e efetivar as políticas públicas é muito importante e válido.

Quadro 3. Relação com a sociedade e formas tradicionais de organização

Fonte: elaboração dos autores, 2019.

Essas respostas demonstram que reduzir e caracterizar os coletivos a organizações que buscam um afastamento, ou que seu diferencial seja estar de costas para o Estado e



de demais formas tradicionais de organização, é algo incorreto. Na fala dos entrevistados são notórios o desejo e o reconhecimento da importância de estarem inseridos ou relacionados com tipos de participação tradicionais para conseguir seus objetivos.

Os coletivos não precisam estar relacionados com todos os tipos de organizações, são diversas as organizações que eles possuem laços de articulação definida pelos objetivos do coletivo. Todos os coletivos entrevistados possuem relação estreita com algum tipo de organização tradicional.

Considerações finais

A sociedade tem se inovado e alterado no tempo e no espaço, seus períodos de inovações têm sido denominados de diferentes formas: modernidade, pós-modernidade, pós-industrial, capitalismo globalizado. Para além dessas definições, é notório a impossibilidade de rompimento e continuidade de heranças e isso não poderia ser diferente com os coletivos. A literatura tentou e insistiu em definir os coletivos como algo totalmente novo, mas quando estudados com mais profundidade e analisados de forma apurada se percebe as fortes tendências que caracterizam esse tipo de organização de forma diversa.

Os coletivos se apresentam como resposta ao engessamento das organizações tradicionais, onde tentativas de inovação na participação têm sido recorrentes. Mas, afirmar que tudo relacionado esse tipo de organização é totalmente “novo” não é correto. Neles existem elementos organizacionais novos e velhos, o novo que convive com o velho, tipo dos tempo pós-modernos.

Os coletivos pesquisados discutem questões de classe, uma temática vista por muitos estudiosos como algo ultrapassado, que não tem mais espaço nas ações coletivas contemporâneas, no qual as identidades e particularidades são a nova onda de discussões. Mas os cinco coletivos estudados na região Nordeste demonstram que as discussões de classe são importantes na sua região e atravessam seus particularismos.

A relação dos coletivos estudados com Estado, movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos está presente. De certa forma, alguns coletivos estudados se apresentam como heranças de partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, uma extensão dessas formas tradicionais que buscam atuar e agregar diferentes tipos de pessoas. A dinamicidade social possibilita encontrar espaços nos quais os atores



coletivos se reinventam cotidianamente, sempre com a finalidade de lutar por participação social, direitos sociais e reconhecimento.

Anexo

	Maranhão	Piauí	Pernambuco	Alagoas	Rio Grande do Norte
Como começou a organização?	O coletivo SOMA surgiu da crescente necessidade de ampliar a visibilidade do criar artístico da mulher maranhense. A ideia surgiu num encontro entre compositoras e produtoras locais no ano de 2017.	O Rua começou em 2014 quando houve o acampamento de formação do Rua. Ele é resultado de vários coletivos que se fragmentaram com o tempo ou com a saída de pessoas.	Criado em setembro de 2015, a partir de incômodos raciais na universidade, conversei com alguns amigos brancos, perguntei o que eles achavam da ideia de criar um coletivo.	Surgiu como uma demanda da secretaria de mulheres do Partido Comunista Brasileiro (PCB) que entendiam que havia uma necessidade de se ter um coletivo feminista classista para construir a luta da libertação da mulher.	Nasceu entre 1998 e 1999, não sei ao certo. Foi criada uma tese a respeito da luta pelo futuro dos estudantes e foi a tese do Quizomba.
Por que decidiram se organizar em coletivo e não em outro tipo de organização?	Acredito que tenha muito a ver com a ideia de criar algo mais livre, que se encaixasse dentro das possibilidades de cada integrante do grupo, estando como coletivo por exemplo, que não estabelece uma "função" específica para cada integrante.	O coletivo ele é muitas vezes é a porta de entrada para outra organização, como o coletivo é integrado pela juventude, vejo como o início de tudo para que as pessoas tomem consciência de classe e organização.	O coletivo a gente tem essa maior facilidade de sair do espaço acadêmico, um núcleo de estudo ou uma organização de alguma coisa, poderia semanticamente trazer uma outra perspectiva para as pessoas de fora.	Da necessidade de me organizar politicamente para além do movimento estudantil, em uma organização que tivesse comprometimento com a construção de outro tipo de sociedade e comecei a procurar coletivos na cidade em que moro.	Justamente pela fluidez do ambiente universitário, as pessoas são bem diferentes, cada um com uma construção, e acho que quando você pensa em um movimento social mais rígido.
Existe formalização em cartório da organização?	Não. A cada encontro uma fica responsável por redigir a ata e disponibilizar para as demais no grupo de whatsapp que utilizamos como canal principal de comunicação e articulação.	Não. Nós temos as relatorias, mas elas são disponíveis apenas aos militantes, então a gente pede que não seja divulgada ou baixada em computador corporativos.	A gente tem essa pauta acerca de ter ou não um CNPJ, ainda estamos em discussão à respeito disso.	Não. Mas todas as reuniões são registradas em relatoria.	Não. Toda reunião tem uma relatoria.
Existe um perfil de participantes que compõe o grupo?	A única determinante para que se faça parte do grupo é que a integrante seja mulher e tenha alguma relação com o meio musical.	Nós temos universitários (a), pessoas prestes a ingressar na universidade, já concluíram o ensino superior. A grande maioria são pessoas LGBT negras, entre homens e mulheres é bem nivelado.	Todos negros. Não tem nenhuma pessoa branca, há uma pessoa parda, e as demais são negras, fenótipos e enfim.	A maior parte das militantes do coletivo são professoras da educação básica e do ensino superior.	É interessante porque tem muitos homens brancos e héteros, inclusive são os mais antigos no coletivo, mas tem o LGBT, tem a "poc" da periferia e de classe média, tem a mulher negra.
Quantas pessoas participam do coletivo?	5 mulheres.	40 pessoas.	12 pessoas.	22 mulheres.	Não tem uma quantidade fixa. Umás 30.

Quadro 2. Criação e organização dos coletivos
Fonte: elaboração dos autores, 2019.



Notas

¹ Mestranda em Sociologia na UFPI, graduada em Direito pelo Instituto Camilo Filho, graduada em Ciências Sociais pela UFPI. lara.cavalcante@live.com

² Professor Associado na UFPI. Do quadro permanente dos Programas de Pós-graduação em Sociologia (acadêmico) e Gestão Pública (profissional). mesquita@ufpi.edu.br

³ Durante o mês de julho de 2013, milhares de pessoas se reuniram nas ruas de várias cidades do país com os mais variados temas, agendas, identidades políticas e estratégias de expressão pública de demandas. Para alguns analistas o que estaria por trás dos eventos que marcaram o mês de junho de 2013 era emoções, revolta e rancor não somente pelas políticas do governo da presidenta Dilma Rousseff (PT) mas também um sentimento de raiva com relação ao sistema político como um todo (Alonso; Mische, 2017).

⁴ Os coletivos utilizam redes sociais como o facebook para promoverem seus agrupamentos e aumentarem sua visibilidade. A pesquisa no facebook procura os grupos que se intitulem de “Coletivo ou Coletiva”.

⁵ A universidade se apresenta como um local que facilita a reunião e organização desses coletivos, mas isso não significa que os mesmos tenham relação com as instituições, se configurando apenas como um “*locus* geográfico” que facilita a reunião de pessoas e ideias.

Referências

Abers, Rebecca; Von Bülow, Marisa. (2011). Movimentos sociais na teoria e na prática: como estudar o ativismo através da fronteira entre Estado e sociedade? *Sociologias*, ano 13, n. 28, p.52-84.

Alonso, A. (2017). A política das ruas: protestos em São Paulo de Dilma a Temer. *Novos Estudos*, São Paulo, n. jun. 2017, p. 49-58.

Alonso, A; Mische, A. (2017). “Changing Repertoires and Partisan Ambivalence in the New Brazilian Protests”. *Bulletin of Latin American Research*, v.36, n.2, abr.pp.139-280.

ASSIS, L. G. (2018). Virada comunicação: como coletivos de comunicação das periferias estão construindo uma nova forma de se comunicar. *Revista Anagrama*, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 1-10.

Augusto, A; Rosa, P. O. e Resende, P. E. R. (2016). Capturas e resistências nas democracias liberais: uma mirada sobre a participação dos jovens nos novíssimos movimentos. *Revista Estudos de Sociologia*, Araraquara, v. 21, n. 40, p.21-37.



Borelli, S. Aboboreira, A. (2011). Teorias/metodologias: trajetos de investigação com coletivos junis em São Paulo/Brasil. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 1 (9). p. 161 - 172.

Castells, M. (2001). *O poder da identidade*. V.II. 3ª ed. São Paulo: Paz e Terra.

Giddens, A. (2002). *Modernidade e identidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.

Gohn, Maria da Glória. (2019). Teorias Sobre A Participação Social: desafios para a compreensão das desigualdades sociais. *Cad. CRH, Salvador*, v. 32, n. 85, p. 63-81.

_____. (2017). *Manifestações e protestos no Brasil: correntes e contracorrentes na atualidade*. São Paulo: Cortez.

_____. (2008). *Novas Teorias dos Movimentos Sociais*. São Paulo: Loyola.

_____. (1997). *Teoria dos Movimentos Sociais paradigmas clássicos e contemporâneos*. Edições Loyola. São Paulo.

HALL, Stuart. (2019). *A identidade na pós-modernidade*. - 12º ed. – Rio de Janeiro: Lamparina.

_____. (2012). *Da Diáspora: Identidade e Mediações Culturais*. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Laclau, E. (1986). Os novos movimentos sociais e a pluralidade do social. *RBCS, São Paulo*, v. 1, n. 2, out.

Laclau, E. (2011). *Emancipação e diferença*. Rio de Janeiro: Eduerj, 2011.

_____. (1986). Os novos movimentos sociais e a pluralidade do social. *RBCS, São Paulo*, v. 1, n. 2, out.

Lima, E. M. O.; Schmitz, H. (2017). Como os coletivos se mobilizam desde as manifestações de junho de 2013 em Belém. *Anais do 18º Congresso Brasileiro De Sociologia*. Universidade de Brasília. Brasília: SBS; 20 p.

Lima, S. (2018). “Coletivo”, “ativista” e “horizontal”: uma análise de categorias em uso no movimento social contemporâneo. *Teoria e Cultura*, v. 13, n. 1, p. 18-34.

Maia, G. L. (2013). A juventude e os Coletivos: como se articulam novas formas de expressão política. *Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, Santa Maria*, v.8, n.1, p. 58-73.

Marques, M. S.; Marx, V. (2019). A interrelação entre coletivos culturais e instituições no Espírito Santo: para além da fronteira (teórica) entre sociedade civil e estado. *Anais do 19º Congresso Brasileiro de Sociologia, Florianópolis*.



Melo, I. C; Perez. (2018). Coletivos de gênero em Teresina-PI: uma forma de participação das mulheres na sociedade atual in Juventudes, subjetividades e sociabilidades – Teresina, PI: Edufipi.

Melucci, A. (2001). A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades complexas. Petrópolis: Vozes.

_____. (1989). Um objetivo para os movimentos sociais? Revista Lua Nova. São Paulo. Junho. Nº 17.

Mesquita, M. R. (2008). Cultura e política: a experiência dos coletivos de cultura no movimento estudantil. Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra (Portugal), v. 81, p. 179 – 207.

Mutzenberg, R. (2002). Ações coletivas, movimentos sociais: aderências, conflitos e antagonismo Social. Recife: o autor.

Penteado; Oliveira. (2019). Autodenominação “coletivo”: o que essa escolha pode nos informar. Anais do 19º Congresso Brasileiro de Sociologia, Florianópolis.

Peralva, A. (2017). O legado de 2013: Coletivos de ativistas e a agenda política brasileira, 41º Encontro Anual da ANPOCS, GT 8.

Perez & Souza. (2017). Velhos, novos ou novíssimos movimentos sociais? As pautas e práticas dos coletivos. 41º Encontro Anual Da Anpocs. Caxambu.

Perez, Olivia. (2017). Surgimento e atuação dos coletivos que discutem clivagens sociais. III Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas. UFES, Vitória (ES).

Santos, B. de S. (2013). Pela mão de Alice: o social e o político na pós- modernidade. – 14. Ed. – São Paulo: Cortez.

_____. (2010). A gramática do tempo: para uma nova cultura política. – 3. Ed.– São Paulo: Cortez.

Tatagiba, L. (2014). “1984, 1992 e 2013: sobre ciclos de protestos e democracia no Brasil”. Política & Sociedade, v. 13, n. 28, pp. 35-62.



“Entre a autonomia e a institucionalização de lutas sociais: Coletivos brasileiros de ocupação e inovação política”.

Flavia de Faria

Resumo

A partir de experiências de inovação democrática e práticas sociais, o debate teórico sobre democracia e movimentos sociais foi desafiado à compreender a coexistência entre modelos de representação e formas de participação fomentada pela sociedade civil. A institucionalização de movimentos sociais e práticas de inovação política tornou-se possível no Brasil no período pós Constituição de 1988, multiplicando-se e aprofundando-se no início do século XXI. Ao mesclar militância com estratégias de “ocupação” das instituições legislativas (Câmaras Municipais, Assembleias e Congresso Nacional), coletivos contemporâneos se inscrevem no desafio da coexistência entre a ampliação de participação e a inserção institucional de atores e movimentos. O objetivo desse trabalho é apresentar aspectos da etnografia realizada em São Paulo e em Belo Horizonte, em 2017 e 2018, com dois coletivos que são referências de campanha e de mandato coletivos no Brasil, as Somos Muitas e a Bancada Ativista. Coletivos que denunciam a sub-representação de setores e atores excluídos, hostilizados ou marginalizados (população LGBTQ+, negros, indígenas, quilombolas), e para garantir que suas pautas transformem-se em políticas públicas, visam a construção de uma bancada parlamentar plurissetorial de lutas sociais. Nesta apresentação, pretendo analisar as seguintes características que, observadas em diversas situações do estudo de campo, constituem elementos comuns entre ambos os coletivos: a ênfase na relação e na coletividade e a criação de métodos e de práticas participativas na instituição e nas ruas.

Palavras chave

Coletivos; Ativismo; Participação; Representação; Ocupação Política.

Introdução

Experiências de participação política são objetos de pesquisa de diferentes áreas das ciências sociais desde os anos 1980 (Singer et Brant, 1980; Sader, 1988; Goldman et Palmeira, 1996; Avritzer et Navarro, 2003; Goldman, 2006; Bringel et Echart, 2008). A intersecção do tema da democracia revela diferentes abordagens a respeito dos limites da representação e do surgimento de modelos participativos (Avritzer, 2004; Tatajiba,



2004; Gurza Lavalle, Houtzager et Castello, 2006; Neveu (org.), 2007; Lüchmann, 2007; Blondiaux, 2008; Manin, 2012). No Brasil, a transição do regime autoritário para a (re)democratização representa um período de intensa reivindicação por participação popular na política e de emergência de movimentos sociais na luta por direitos, cidadania e igualdade (Boschi, 1987; Paul Singer et Brant, 1980; Sader, 1988; Dagnino, 1994; Holston, 2013). A partir de diversas experiências de inovação democrática, o debate teórico sobre democracia foi desafiado à compreender a coexistência entre modelos de representação e formas de participação fomentada pela sociedade civil emergente. A institucionalização de movimentos sociais e práticas de inovação política tornou-se possível no período pós Constituição de 1988, multiplicando-se e aprofundando-se no início do século XXI (Almeida, 2010; Avritzer, 2012; Gurza Lavalle et Isunza Vera, 2015).

Ao mesclar militância com estratégias de “ocupação” das instituições políticas (Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas e Congresso Nacional), coletivos contemporâneos se inscrevem nesse desafio da coexistência entre a ampliação de participação e a inserção institucional de atores e movimentos sociais. O objetivo deste artigo é apresentar aspectos da etnografia realizada nas capitais mineira e paulista de 2017 à 2019 com dois coletivos que são referências de campanha e de mandato coletivos no Brasil, as Somos Muitas e a Bancada Ativista. Trata-se de coletivos que denunciam a sub-representação de setores e atores excluídos, hostilizados ou marginalizados (população LGBTQ+, negros, indígenas, quilombolas), e para garantir que suas pautas tornem-se políticas públicas, visam a construção de uma bancada plurissetorial de lutas sociais no legislativo.

As Somos Muitas e a Bancada Ativista são movimentos nascidos em Belo Horizonte e em São Paulo após a onda de reivindicações de junho de 2013. Nesse contexto, se fortalecia a Copac (Comité Popular dos Atingidos pela Copa), o movimento de ambulantes que reivindicavam o direito de trabalhar nos locais oficiais de realização de jogos durante a Copa, assim como coletivos urbanos de ocupação de espaços públicos, e movimentos de auto-gestão, tais como a Assembleia Popular Horizontal, que tomou o viaduto Santa Teresa em Belo Horizonte para discutir as fraquezas da democracia representativa e construir alternativas para transformar o sistema político. No cenário de efervescência e de confluência de diferentes lutas sociais, as Somos Muitas pela Cidade que Queremos foi ganhando força e expansão, ampliando o seu repertório de



reivindicações de direito à cidade, à moradia, ao transporte público, para a exigência de participação nas decisões políticas do município de Belo Horizonte.

Inspirada na experiência das Somos Muitas, a Bancada Ativista nasceu na capital paulista em 2016 com o objetivo de experimentar uma campanha eleitoral de apoio a candidaturas inéditas de ativistas (pela Rede e pelo Psol) para a Câmara de vereadores de São Paulo. A expansão da democracia é pretendida através do apoio à candidatura de ativistas que almejam um mandato coletivo e métodos participativos para a ação legislativa. São ativistas que passam do cenário de atuação na sociedade civil para membros das instituições legislativas. Ou seja, passam a ser escreventes das políticas públicas e não apenas o seu destinatário. Nas eleições de 2016, ambos lançaram candidaturas coletivas de militantes LGBTQ+s, feministas, indígenas, quilombolas, de movimentos por moradia, entre outros, e elegeram duas vereadoras (Psol) em Belo Horizonte – inaugurando a Gabinetona, a “mandata coletiva” da Câmara Municipal – e uma vereadora (Psol) em São Paulo. Porém, a atuação do mandato foi diferente em cada um deles. A atuação das vereadoras eleitas em Belo Horizonte se destacou por inaugurar o modelo de mandato coletivo, que foi reproduzido em São Paulo com a posse, em março de 2019, da co-candidatura a deputado estadual da Bancada Ativista (Psol).

Um ano depois das eleições municipais de 2016, a Bancada Ativista e as Somos Muitas iniciaram as articulações para criar o primeiro encontro do movimento nacional #Ocupa Política, Pé na porta e Amor pela democracia. Na confluência de diversas pautas, tais como a legalização do aborto, o direito à moradia, a proteção de terras indígenas e quilombolas, a primeira reunião nacional do #OcupaPolítica foi realizada na ocupação urbana Carolina Maria de Jesus, em Belo Horizonte (2017) seguida pela reunião em São Paulo (2018) e em Recife (2019). Em Belo Horizonte foi a ocasião de encontros de centenas de militantes vindos de dezoito estados brasileiros, assim como alguns representantes de experiências locais do México, Chile, da Colômbia e Espanha. Engajados com diferentes lutas, o objetivo foi promover o encontro para construir e fortalecer candidaturas coletivas para as eleições de 2018. Durante quatro dias de atividades, oficinas, rodas de conversa, debates e mapeamento das pautas, o #OcupaPolítica se fixou como objetivo “hackear a política brasileira”, através de duas estratégias: construir alternativas para que ativistas se elejam pela primeira vez e constituir uma bancada plurissetorial e suprapartidária (por enquanto composta por



filiados ao Psol, à Rede e há também quem não seja filiado a nenhum partido) de movimentos sociais no legislativo.

Em 2018, a campanha coletiva da Bancada Ativista elegeu nove co-deputados dentre eles a primeira deputada negra e transexual e a primeira deputada indígena do estado de São Paulo, Erika Hilton e Chirley Pankará. Em Minas Gerais, as Somos Muitas elegeu a deputada federal mais bem votada no seu partido e uma deputada estadual, ampliando a Gabinetona para as três instâncias do Poder Legislativo.

Pretende-se analisar as seguintes características que, observadas em diversas situações do estudo de campo, constituem elementos comuns entre as experiências de Belo Horizonte e de São Paulo. Primeiro, trata-se de fazer política relacional, com ênfase no coletivo, através da denúncia do personalismo. Por um lado, o rechaço de líderes e porta-vozes internamente, assim como a resignificação do sentido de coletividade, de relação e de confiança; Por outro lado, remete à concepção de uma política relacional, baseada no encontro face à face, na escuta e na ausência de mediação entre candidatos, eleitos e eleitores. Segundo, a crítica da ineficiência da democracia representativa cujas decisões são tomadas de cima para baixo, em instituições verticais e hierárquicas. Sugere-se “hackear” a política tradicional, estimulando a construção de métodos de participação da população, de movimentos e de comunidades, de decisão coletiva e de tendência à horizontalidade. A política tradicional é criticada pela sub-representação de mulheres, negros, indígenas, pela práticas de clientelismo, de controle de participação, de autoritarismo e de personalismo.

Ocupar as instituições e resignificar o sentido de coletividade: por uma política relacional

A Bancada Ativista e as Somos Muitas são movimentos contemporâneos em São Paulo e em Belo Horizonte que reivindicam mandatos coletivos, denunciando o personalismo e os limites da representação. São coletivos que apoiaram candidaturas inéditas de ativistas e militantes, em 2016 e em 2018, para os cargos legislativos de vereador, deputado estadual e federal. As candidaturas apoiadas por esses movimentos são de pessoas engajadas em diferentes lutas sociais visando ocupar a política institucional e, mais precisamente, criar uma bancada suprapartidária e intersetorial no poder legislativo brasileiro. Recusam o personalismo na política e promovem candidaturas coletivas cujo projeto é colocar em prática um mandato coletivo com todos os candidatos apoiados. As Somos Muitas elegeram duas vereadoras nas eleições municipais de 2016



em Belo Horizonte, Cida Falabella e Aurea Carolina, que inauguraram a Gabinetona ao remover a parede que separava os dois gabinetes e formaram uma equipe conjunta. A Gabinetona também é composta por outros candidatos apoiados pelo coletivo durante a eleição mas que não conseguiram se eleger. Mesmo que gabinete corresponda a uma palavra masculina, o termo utilizado pelas Somos Muitas é Gabinetona no feminino.

Com relação à campanha eleitoral das candidaturas apoiadas, as Somos Muitas realizaram uma campanha coletiva em que a candidata não pedia votos para si próprio mas para o seu colega, que disputava o mesmo cargo.

“Somos muitos movimentos. Muitos desejos. Muitos encontros. Muita esperança de fazer política para o bem comum. Assim, BH viu surgir as MUITAS pela cidade que queremos. Depois de um ano e meio de muitas conversas e construções coletivas, temos a alegria de apresentar as 12 candidatas que se dispuseram em caminhar juntas para a câmara municipal. Cada uma delas tem o compromisso de realizar um mandato coletivo, transparente e representativo, lutar pela redução dos privilégios do cargo e trabalhar por uma cidade mais justa e solidária. Se você votar em uma, você votará em todas” (santinho da campanha coletiva das Somos Muitas em 2016).

A campanha eleitoral de rejeição do personalismo, promoção da coletividade e luta intersectorial também foi flagrante na campanha da Bancada Ativista, que apoiou oito candidaturas para a Câmara Municipal de São Paulo em 2016 e nove co-candidatas em 2018 para deputada estadual. Em 2016, dois manifestos defendidos pelos candidatos apoiados foram corroborados e assinados coletivamente. O primeiro é o #NaoTemConversa, um apoio ao movimento feminista. O manifesto argumenta que, para haver um debate legítimo em qualquer evento coletivo, mesa redonda, fóruns, etc. É preciso que haja ao menos uma mulher presente e participando do debate. Se a composição de equidade entre homens e mulheres não é garantida, o espaço de interação e decisão não é legítimo, diz o manifesto. O segundo apoia a luta contra o racismo: o #NemTentaArgumentar denuncia a ineficiência e ilegitimidade de qualquer forma de construção política construída na ausência de pessoas negras. Ambos manifestos submetem a legitimidade da tomada de decisão política à presença e voz de grupos sociais que atualmente são sub-representados nas arenas de tomadas de decisão política.

Nas eleições municipais de 2016, a Bancada Ativista apoiou ativistas de movimento negro, feministas e anti-capitalista, hackerativista e ativistas de movimentos LGBTQ+s. Sâmia Bomfim foi eleita com quase 12.500 votos. As oito candidaturas apoiadas provém



de dois partidos políticos: o Psol e a Rede Sustentabilidade. Em 2018, a Bancada Ativista, mesmo lançando uma candidatura coletiva com nove co-candidatas de diferentes partidos (Psol, Rede e uma não filiada a nenhum partido), precisou formalmente se associar a um partido político para registrar a candidatura. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro só aceita o registro de uma candidatura quando realizado com o nome e documento de uma única pessoa. Assim, a Bancada Ativista registrou a candidatura no nome da Monica Seixas (filiada ao Psol), mas as oito co-candidatas eleitas ocupam a mandata (no feminino) formalmente registrada por Monica Seixas. “Foi muito de boa o processo de escolha do nome na urna. A gente queria um nome de preferência que fosse de mulher, da periferia, não branca, ou seja, que representasse ao máximo a diversidade das nossas pautas”, explica Jesus dos Santos, co-deputado estadual.

“Ao escolher o nome que apareceria na urna, tivemos vários debates e queríamos saber quem representava melhor a diversidade da Bancada. Eu sou mãe, mulher negra, morando no campo, vindo de um meio pobre, rural, militante pelo acesso à água potável [Itú, a cidade de Mônica viveu mais de dez meses de racionamento de água durante a grave crise hídrica de 2014 no Estado de São Paulo]. Então decidimos coletivamente que eu seria o nome que apareceria nas urnas”, diz Monica Seixas em entrevista no dia 25 de setembro de 2018.

Ao contrário da disputa que pode ser observada na lógica competitiva entre os partidos políticos (e mesmo dentro deles), a coexistência de diferentes partidos em uma campanha é um dos destaques do coletivo. Essa lógica da coletividade – de um pedir voto para o outro (ainda que sejam de partidos diferentes) e de priorizar a pauta da Bancada Ativista acima do partido político – não foi aceita por alguns partidos cujos pré-co-candidatos decidiram deixar o projeto para evitar conflitos no partido. Em 2018, o coletivo apoiou as co-candidaturas de Monica Seixas, feminista, mãe e ativista dos direitos humanos e do direito à água, Erika Hilton, mulher negra transvestigenera que atua em movimentos por direitos da população LGBTQ+, Chirley Pankará é indígena, professora e educadora que milita pelos direitos da população originária e, junto com Paula Aparecida, professora secundarista da rede pública, e Cláudia Visoni, jornalista, permacultora, atuam em movimentos pelo direito dos animais e pela proteção ambiental. Anne Rammi é mãe e ativista, defende os direitos da criança, da primeira infância e, junto com Raquel Marques, doutora pela Faculdade de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo, reivindicam os direitos da mulher pelo parto humanizado e por métodos obstétricos menos invasivos. Jesus dos Santos, de 33 anos, participa



desde o início do Movimento Cultural das Periferias e do movimento negro. Por fim, Fernando Ferrari é militante da cultura, morador da periferia da zona Sul de São Paulo e luta contra o genocídio da população negra e periférica.

Das nove co-candidatas “com exceção de Raquel, que é doutoranda, todas as outras possuem conhecimento que vem do concreto, da rua”, diz Monica Seixas em entrevista datada de 25 de setembro de 2018. Contrariamente ao personalismo da política tradicional ocidental (Manin 2012), o movimento não procura construir a imagem do político como um salvador. Pelo contrário, por um lado, prevê a construção de uma candidatura que apresente características semelhantes às de grupos socialmente oprimidos e contribua para a redução da sua sub-representação nas instituições do legislativo. Por outro lado, nessa conjuntura, a dinâmica do processo eleitoral no que diz respeito ao eleitor ultrapassa a necessidade deste escolher apenas um único candidato para deputado, e promove a possibilidade de votar em grupo para ocupar coletivamente o cargo.

O movimento fornece apoio pedagógico, financeiro, de comunicação e estratégico para a campanha eleitoral. As pessoas envolvidas com a Bancada Ativista lançaram um financiamento online para custear uma formação aos candidatos sobre o funcionamento do sistema de quociente eleitoral no Brasil, um treinamento de comunicação e mídia, além do suporte para a produção e design de todos os anúncios, posts e material de campanha. Os participantes são voluntários e se dividem em grupos de trabalho para gerenciar a agenda das co-candidatas, sua publicidade, marketing digital, comunicação de imprensa, etc.

Nesse sentido, segundo os participantes envolvidos, a outra maneira de fazer política reivindicada pelo coletivo passa por tornar possível a eleição de ativistas da sociedade civil que não possuem os meios financeiros e estratégicos necessários para concorrer e ganhar uma eleição. Sabe-se que a cada eleição, perfis específicos de candidatos enfrentam diversos obstáculos institucionais e culturais, sobretudo quando se tratam de mulheres, negros, indígenas e travestis (Meneguello 2012; Campos e Machado 2015; Campos e Machado 2017; Araújo 1998; Araújo 2001; Speck, Sacchet e Santos 2012). Em 2018, as mulheres ocupam apenas 13% da composição das Câmaras Municipais e 16% das Assembleias Legislativas brasileiras, 15% da Câmara dos deputados e 13% do Senado. Nesse sentido, questões de classe, raça e gênero implicam obstáculos adicionais que dificultam e às vezes impossibilitam o sucesso eleitoral de certas candidaturas.



Tais obstáculos são amenizados por estratégias de campanha de financiamento coletivo online. Por serem nove co-candidatas, a Bancada Ativista alcançou um público muito maior do que campanhas online criadas por apenas um candidato, ainda que comparada ao candidato que obteve o maior número de votos do partido. Em 2018, o financiamento online das co-candidatas arrecadou 72.648 mil reais, o que representou 82% do total do recurso de campanha. Além do financiamento coletivo online. O Psol investiu 5.358,67 mil reais, o que corresponde a aproximadamente 6% do total do recurso utilizado na campanha da Bancada Ativista, que somados a outras receitas totalizou 87.918 mil reais declarados pelo coletivo ao Tribunal Superior Eleitoral. Já o financiamento coletivo online do candidato ao mesmo cargo mais votado do Psol, Carlos Giannazi (homem branco) obteve o valor de 37.871 mil reais, aproximadamente 9% do total do recurso utilizado na sua campanha eleitoral. Em contraste, o Psol investiu 103.645 mil reais em sua campanha eleitoral, o que equivale a aproximadamente 25% do total de recurso utilizado para sua campanha cujo valor declarado foi de 405.547 mil reais. Assim, o total arrecadado pela candidatura coletiva da Bancada Ativista representa 85% apenas do valor recebido de Giannazi pelo Psol.

“Não tínhamos meios para circular no estado de São Paulo para fazer campanha. Nós conseguimos fazer isso graças ao financiamento coletivo [online]. Durante a campanha, quando um de nós não tem dinheiro suficiente para pagar, por exemplo, o aluguel pessoal, todos os outros que têm melhores condições financeiras contribuem para colaborar com o outro. Esse tipo de apoio também temos na Bancada Ativista”, explica Monica Seixas, co-deputada estadual (entrevista do dia 25 de setembro de 2018).

O personalismo que produz o protagonista é uma característica recorrente na lógica da política partidária tradicional (Manin 2012). Entretanto, na prática da campanha coletiva, o protagonismo é uma característica fortemente rejeitada. Assentados numa base relacional de confiança e de diálogo, o movimento vê o altruísmo no centro das campanhas eleitorais, conhecidas tradicionalmente por suas práticas predatórias e competitivas mesmo no interior dos partidos. Durante o campo realizado em 2017, pude acompanhar reuniões e processos nos quais os participantes da Bancada Ativista respondiam coletivamente às entrevistas e reportagens da mídia, elaborando as respostas em um documento compartilhado. Após a campanha eleitoral de 2016, uma revista brasileira queria publicar um artigo sobre o movimento, ilustrando-o com a foto de seu representante. O coletivo apresentou a imagem abaixo, explicando que o movimento não tinha representante, o que não foi aceito pela revista, que acabou não publicando o artigo. A resposta pública do coletivo nas redes sociais foi a seguinte:

“É bem comum veículos de comunicação nos pedirem para sermos representados por apenas uma pessoa em entrevistas. Nossa resposta é sempre a seguinte: nós não acreditamos na política onde poucos têm grande protagonismo. Nós temos muitas caras, e o que nos representa é essa diversidade. Por isso, sempre insistimos para assinar entrevistas coletivamente e aparecer em fotos com vários rostos (...) A Bancada Ativista é coletiva e a foto que nos representa é essa aí!”, publicação no Facebook da Bancada Ativista do dia 4 de outubro de 2017.



Práticas de utilização de espaços públicos e participação: a relação entre o político e o eleitor

A relação de independência entre os políticos eleitos e seus eleitores durante o mandato aponta para um aspecto problemático do regime democrático, visto que os representantes acabam decidindo e trabalhando em políticas públicas pouco influenciados pelo povo (Gurza Lavalle e Isunza Vera 2015; Gurza Lavalle, Houtzager e Castello 2006; Tatagiba 2004; Almeida 2010; Borba e Lüchmann 2007). Tal aspecto representa um dos fatores contraditórios da democracia elencados por Bernard Manin em sua obra *Princípios do governo representativo*. Como poderia a representação ser eficaz se ela está limitada à eleição? Como poderia a democracia dar conta de seu propósito participativo e coletivo se levado em conta apenas um único evento participativo? O regime democrático deve ser mais vasto do que o exercício do voto e a participação dos eleitores mais deliberativa durante o mandato dos representantes.

A democracia como demanda dentro desses coletivos, no contexto brasileiro, exige transformações institucionais que permitam a participação dos eleitores para além do voto, com práticas que garantam espaços de decisão compartilhada e que promova compromisso pessoal com a integração cultural e identitária nas práticas quotidianas.



“Já ocupamos as ruas pelos direitos das mulheres. Ocupamos as avenidas pela mobilidade urbana. Ocupamos as praças para denunciar as estruturas dessa sociedade racista e desigual. Estamos na política todos os dias e agora queremos ocupar o Parlamento. Nós exigimos uma política verdadeiramente transformadora, transparente e participativa”. (Flavia, ativista das Somos Muitas).

Nesse sentido, as práticas descritas a seguir visam estimular a participação e a experimentação das ruas e da cidade como espaços de disputa, de conflito e também de sociabilidade e de reivindicação. As Somos Muitas promovem assembleias abertas em diferentes territórios da cidade para facilitar a participação de comunidades e movimentos descentralizados. Em Belo Horizonte, as reuniões das Somos Muitas são realizadas frequentemente em espaços públicos e em ocupações urbanas. Trata-se de uma estratégia para se manter em diálogo com os movimentos sociais e fortalecer os laços com as comunidades e habitantes das periferias. A mandata da Bancada Ativista, por sua vez, inaugurou a Frente Parlamentar da Cultura no Teatro dos Containers, na Santa Ifigênia, região do centro, para somar com a presença de moradores e interessados fora do espaço institucional da Assembleia Legislativa. Durante os meses de janeiro e junho de 2018, a Bancada Escuta foi organizada em diferentes territórios da cidade de São Paulo, na zona sul, norte, leste e no centro.

A Bancada Ativista também organizou eventos públicos como o Flertaço com os candidatos, para promover a interação e o diálogo cara-a-cara das pessoas com os candidatos apoiados. Flertaço lança a ideia das pessoas flertarem com a política. “Vamos trazer de volta o seu amor pela política”, anuncia o movimento. O evento consiste em convidar as pessoas que estão passando pela rua para sentar-se numa cadeira em frente a um dos candidatos para fazer perguntas em um diálogo sem a mediação de um terceiro. Depois de cinco minutos, as pessoas sentadas são convidados a trocar de cadeira para sentar-se diante de outros candidatos presentes.

Flertaço e Bancada Escuta promovem o relacionamento direto dos candidatos com a população. Por um lado, a ocupação do espaço público aparece como uma prática para tornar visível a rua em sua multiplicidade de problemas e realidades, imprevistos e interrupções, assim como potencialidades e criatividade. Por outro lado, a experimentação do diálogo cara-a-cara com os candidatos em torno de problemas e projetos locais reforça a prática de uma política que privilegia a relação, o olhar e a presença.



Em Belo Horizonte, a Gabinetona inaugurou práticas de participação e de relação de projetos de lei com a população. O LabPop (Laboratório Popular) escreveu por exemplo, o Projeto de Lei (PL) n.533 / 2018 com a representantes de movimentos feministas e de direito à moradia para garantir o direito de mulheres vítimas de violência doméstica a serem acolhidas em acomodações públicas e seguras. Este PL foi aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte em março de 2019 e sancionado pelo prefeito em 25 de abril de 2019, tornando-se Lei nº 11.166 / 2019. “Todos os projetos foram redigidos de forma aberta e colaborativa através dos Laboratórios Populares. Os LabPops são círculos de conversa e de trabalho colaborativo com a população”, explica Cida Falabella, artista e ativista eleita vereadora em 2016.

Com respeito às práticas participativas, Jesus dos Santos, co-deputado da Bancada Ativista, mobilizou no dia 22 de maio de 2019 o primeiro encontro do ciclo de debates orçamentários da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). A atividade foi feita na ALESP, e teve “12 ou 13 das 21 emendas escritas colaborativamente com agentes culturais, produtores, artistas e ativistas do movimento de cultura”, explica Jesus dos Santos. O co-deputado explica que as decisões internas do Movimento Cultural das Periferias – movimento que integra desde 2014 – sempre foram tomadas em assembleias abertas, e conta que desde o início de seu envolvimento.

“Quando se fala em inovação política, é importante olhar para o que já vem sendo feito por movimentos da periferia. Já estamos pressionando as instituições, ali dentro fazendo política, buscando parlamentares para aderir nossa pauta da cultura. Agora estamos trazendo para a ALESP práticas participativas que já vinham sendo feitas no Movimento Cultural das Periferias, estamos trazendo aqui para nossa mandata a expertise participativa do Movimento Cultural das Periferias, criando na instituição legislativa os ciclos de debates orçamentários para discutir e propor coletivamente com a população interessada as emendas da Bancada ativista para a LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] do Estado de São Paulo [cujo objetivo é proceder à distribuição do orçamento do Estado para as diferentes áreas de políticas públicas]”, Jesus dos Santos, entrevista do dia 6 de junho de 2019.

Considerações finais: A “democracia da experiência”

Pretendeu-se neste artigo apresentar práticas de coletivos de ocupação política contemporâneos e discuti-las à luz de características que lhes são comuns, tais como a prevalência da coletividade sobre o personalismo, a criação de espaços institucionais de confluência de diferentes movimentos sociais, a denúncia da sub-representação



como alicerce para fomentar a ocupação política de ativistas, o uso de espaços públicos para atividades internas e a construção de métodos participativos.

Seria possível afirmar que esses coletivos promovem a transformação de um modelo de delegação para o de democracia participativa? A hipótese aqui defendida é que a existência desses movimentos não respondem positivamente à tal questão, embora façam parte de um processo de descontentamento com os mecanismos representativos. Ainda que esbocem sua aspiração por um regime mais participativo e menos hierárquico, os próprios coletivos vivenciam a experiência desafiadora da horizontalidade e da participação. “A Bancada Ativista é parte desse contexto de confluência de diferentes lutas, mas essa coexistência de realidades tão diferentes dentro da mesma mandata nos traz grandes desafios pragmáticos e ideológicos”, afirma o co-deputado Jesus dos Santos.

Uma pesquisa mais longa e detalhada deverá acompanhar os mandatos coletivos afim de analisar, na temporalidade dos fatos, o impacto de tais práticas na relação entre eleitores e mandatos eleitos além, da taxa de participação durante o referido período. Se essas experiências reforçam a relação entre a representação e a participação, será de grande relevância para estudos sobre política brasileira considerar a coerência entre os princípios e práticas iniciais e aqueles que se manterão ou se transformarão. A “democracia da experiência” reflete a construção cotidiana de táticas para construir dentro do legislativo possibilidades de *hackear* o modelo político vertical, hierárquico e majoritariamente composto por homens brancos e ricos (Meneguello, Mano e Gorski 2012; Speck, Sacchet e Santos 2012; Campos e Machado 2015).

“Experimentar é constituir um contrapoder dentro mesmo das situações. Experimentar é se projetar em outra forma de vida e de atividade, de pensamento e de criação. Experimentar é opor aos dispositivos de dominação um poder de autonomia e singularização. Experimentar é variar uma situação para modular as perspectivas” (Citton 2012, p.123).

A “democracia da experiência” mescla o público com o privado, a amizade e o engajamento, a diversão e a resistência. Trata-se mais de uma prática do que de uma teoria, que não rejeita a representação, mas aspira incluir a participação e a distribuição de espaços de fala e de decisão para além de audiências e de conselhos consultivos. Pretende fortalecer a coletividade e formas de horizontalizar-se, rejeitando o personalismo e o heroísmo político. Enfim, através do hibridismo de tecnologias sociais e virtuais, essas experiências eleitorais ainda são frágeis e minoritárias, porém já estão



presentes em três esferas do legislativo, em Câmaras Municipais, em Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados, mostrando sua eficácia em pouco tempo e com pouca verba.

Referências bibliográficas

Almeida Debora Rezende de, 2010, «Metamorfose da representação política: lições práticas dos conselhos municipais de Saúde no Brasil» dans Leonardo Avritzer (ed.), *A dinâmica da participação local no Brasil*, São Paulo, SP, Cortez Editora (coll. «Coleção Pensando a democracia participativa»).

Araújo Clara, 2001, «Potencialidades e limites da política de cotas no Brasil», *Revista Estudos Feministas*, 2001, vol. 9, nº 1, p. 231-252.

Araújo Clara, 1998, «Mulheres e Representação Política: a experiência das cotas no Brasil», *Revista Estudos Feministas*, 1998, vol.6, nº1, p. 71-90.

Avritzer Leonardo, 2012, «Sociedade civil e Estado no Brasil: da autonomia à interdependência política», *Opinião Pública*, 2012, vol.18, nº2, p. 383-398.

Avritzer Leonardo, 2004, *A participação em São Paulo*, 1a. ed., São Paulo, SP, Editora UNESP, 470p.

Avritzer Leonardo et Navarro Zander (eds.), 2003, *A inovação democrática no Brasil: o orçamento participativo*, São Paulo, SP, Cortez Editora, 334 p.

Blondiaux Loïc, 2008, *Le nouvel esprit de la démocratie: actualité de la démocratie participative*, Paris, Seuil (coll. «La république des idées»), 109p.

Borba Julian et Lüchmann Lígia Helena Hahn (eds.), 2007, *Orçamento participativo: análise das experiências desenvolvidas em Santa Catarina*, Florianópolis, SC, Editora Insular, 224p.

Boschi Renato Raul, 1987, *A arte da associação: política de base e democracia no Brasil*, São Paulo, Vertice (coll. «Grande Brasil: veredas»), 199p.

Bringel Breno et Echart Enara, 2008, «Movimentos sociais e democracia: os dois lados das "fronteiras"», *Caderno CRH*, décembre 2008, vol. 21, nº54, p. 457-475.

Campos Luiz Augusto et Machado Carlos, 2017, «O que afasta pretos e pardos da representação política? Uma análise a partir das eleições legislativas de 2014», *Revista de Sociologia e Política*, mars 2017, vol. 25, nº 61, p. 125-142.

Campos Luiz Augusto et Machado Carlos, 2015, «A cor dos eleitos: determinantes da sub-representação política dos não brancos no Brasil», *Revista Brasileira de Ciência Política*, avril 2015, nº16, p. 121-151.

Citton Yves, 2012, *Renverser l'insoutenable*, Paris, Éditions du Seuil, 208p.



Dagnino Evelina, 1994, *Os Anos 90: política e sociedade no Brasil*, São Paulo, SP, Editora Brasiliense, 172p.

Faria Flávia de, 2018, «Participação, renovação e ocupação: limites da representação e experiências de transformação política na cidade de São Paulo», *Revista Contraponto*, 2 août 2018, vol. 5, n° 1.

Frúgoli Jr. Heitor, 2018, «Ativismos urbanos em São Paulo», *Caderno CRH*, avril 2018, vol. 31, n° 82, p. 75-86.

Goldman Marcio, 2006, *Como funciona a democracia: uma teoria etnográfica da política*, Rio de Janeiro, 7 LETRAS, 367p.

Goldman Marcio et Palmeira Moacir, 1996, *Antropologia, voto e representação política*, Rio de Janeiro, RJ, Contra Capa, 235p.

Gurza Lavallo Adrián, Houtzager Peter P. et Castello Graziela, 2006, «Democracia, pluralização da representação e sociedade civil», *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, 2006, n°67, p. 49-103.

Gurza Lavallo Adrián et Isunza Vera Ernesto, 2015, «Representación y participación en la crítica democrática», *Desacatos*, décembre 2015, n° 49, p. 10-27.

Holston James, 2013, *Cidadania insurgente: disjunções da democracia e da modernidade no Brasil*, São Paulo, Companhia das Letras.

Lüchmann Lígia Helena Hahn, 2007, «A representação no interior das experiências de participação», *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, 2007, n°70, p. 139-170.

Manin Bernard, 2012, *Principes du gouvernement représentatif*, Paris, Flammarion (coll.«Champs Essais»), 347p.

Meneguello Rachel, Mano Maíra Kubik et Gorski Caroline, 2012, «Alguns condicionantes do déficit representativo de mulheres e negros na política» dans *Mulheres e negros na política: estudo exploratório sobre o desempenho eleitoral em quatro estados brasileiros*, 1a ed., Campinas, Centro de Estudos de Opinião Pública, Universidade Estadual de Campinas.

Meneguello Rachel, Speck Bruno Wilhelm, Sacchet Teresa, Mano Maíra Kubik, Santos Fernando Henrique dos et Gorski Caroline, 2012, *Mulheres e negros na política: estudo exploratório sobre o desempenho eleitoral em quatro estados brasileiros*, 1a ed., Campinas, Centro de Estudos de Opinião Pública, Universidade Estadual de Campinas, 106 p.

Neveu Catherine (ed.), 2007, *Cultures et pratiques participatives: perspectives comparatives*, Paris, Harmattan (coll.«Logiques politiques»), 396p.



Sader Eder, 1988, *Quando novos personagens entram em cena - Experiências e, Falas e Lutas dos Trabalhadores da Grande São Paulo (1970-80)*, Rio de Janeiro, Paz e Terra.

Singer Paul et Brant Vinícius Caldeira, 1980, *São Paulo: o povo em movimento*, 2a edição., Petrópolis, Ed. Vozes e CEBRAP.

Speck Bruno, Sacchet Teresa et Santos Fernando Henrique dos, 2012, «Financiamento de campanhas de homens e mulheres candidatos a deputado estadual e deputado federal nas eleições gerais de 2010 no Brasil» dans *Mulheres e negros na política: estudo exploratório sobre o desempenho eleitoral em quatro estados brasileiros*, 1a ed., Campinas, Centro de Estudos de Opinião Pública, Universidade Estadual de Campinas.

Tatagiba Luciana, 2004, «A institucionalização da participação: os conselhos municipais de políticas públicas na cidade de São Paulo» dans *Participação em São Paulo*, 1a. ed., São Paulo, SP, Editora UNESP, p.323-370.

Young Iris Marion, 2014, «Desafios ativistas à democracia deliberativa», *Revista Brasileira de Ciência Política*, avril 2014, nº13, p. 187-212.



El movimiento político aymara de Chile en la década de los '90.

Luis Godoy Saavedra
Darío Omar Funes Vidal

Resumen

El estudio analiza la trayectoria del movimiento político aymara en la década del '90 en tres etapas: a) CEPI, entre 1990 y 1994, durante la cual el movimiento aymara coopera con el gobierno en la elaboración y posterior aprobación de la nueva Ley Indígena; b) CONADI, en el periodo 1994 – 1999, específicamente la organización de un proceso de sistematización de la “demanda indígena” y la conformación, dirigida por la Corporación a través del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de un referente organizacional que organizara esta demanda, el Consejo Nacional Aymara (CNA), y; c) El Área de Desarrollo Indígena como nuevo formato de procesamiento y representación de la demanda indígena, en detrimento del mismo CNA.

A partir de ello, se plantea la discusión de si efectivamente se trata de un movimiento social, tal como los propios dirigentes lo afirman, o bien de una forma de elite indígena para-estatal, o sea, dependiente de las instituciones estatales y los partidos políticos en ellas presentes. Este aspecto cobra importancia desde la óptica de los alcances que puede tener una política de Estado, específicamente si ésta tiene como objetivo organizar la demanda de un sector de la sociedad y orientar desde instituciones estatales un referente representativo que la canalice ante el mismo Estado. Por otra parte, y en forma complementaria, nos plantea la pregunta respecto a cuan sólida puede ser una estructura de dirigencias de representación que basa su sustentabilidad en los subsidios del Estado para su conformación, mantención y desarrollo.

Palabras clave

Movimiento político aymara; Estado; Demanda indígena.

Introducción

En Chile, el tema étnico comenzó a adquirir importancia política a partir del retorno a la democracia y la llegada de la Concertación de partidos de centroizquierda al gobierno. Pese a constituir un grupo demográficamente pequeño en comparación a otros sectores sociales marginados, los indígenas tuvieron una considerable presencia política, atrayendo la preocupación del Estado sobre su situación, derechos y demandas. Su peso ha sido mayor a nivel del poder ejecutivo, del gobierno, no así respecto al parlamento y al poder judicial. Asimismo, en el período, los representantes de los



pueblos indígenas lograron que se vaya formando una imagen positiva hacia ellos y sus demandas.

Ya antes de la elección presidencial, en 1989, se firmó un acuerdo entre el candidato concertacionista, Patricio Aylwin, y las principales organizaciones de los pueblos indígenas, que es conocido como Acuerdo de Nueva Imperial. Los compromisos asumidos son planteados como el inicio de una nueva relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, acordándose cuatro compromisos fundamentales: 1) reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; 2) elaboración de una nueva ley indígena; 3) aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y 4) participación política en las instancias estatales relacionadas a la temática indígena.

Con el objeto de asumir estas tareas, se crea en mayo de 1990 la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), definida como organismo asesor del Presidente de la República, con el cual se comunicaría a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que debía prestarle también apoyo administrativo. La CEPI tuvo como misión central generar la discusión y propuesta para la futura Ley Indígena y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, entidad estatal encargada de gestionar el mandato de la Ley en favor de la población indígena.

La política estatal se enfocará en este periodo a promover la inclusión de los pueblos indígenas con respecto a su diferencia, es decir, integrarlos respetando sus culturas y formas de vida. A su vez, éstos van elaborando un discurso reivindicativo e identitario que atribuye al Estado el papel fundamental en la solución de sus problemas, o sea, que privilegia lo político como medio de integración social. Por todo ello, la política indígena de la Concertación puede interpretarse como una excepción o anomalía respecto del modelo neoliberal.

Entendemos la relación entre la política estatal y la acción reivindicativa indígena como una interacción entre actores políticos independientes, cuyas modalidades y grados de articulación son mayores que en el pasado, lo que representa un cambio importante respecto de la forma en que se había tratado la “cuestión indígena” por parte de los Estados nacionales latinoamericanos, desde su formación a inicios del siglo XIX. Se rompe con la política de asimilación de los pueblos o naciones originarias a favor de un reconocimiento de las diferencias étnico-culturales y de los derechos indígenas. Esto es, se abandona el ideal de una nación homogénea culturalmente y basada en derechos ciudadanos igualitarios y universales, sin distinciones de clase, de género o étnicas, etc.



En este marco, se analiza el intento de construcción desde la CONADI de un referente étnico, el Consejo Nacional Aymara, y el desarrollo de distintas acciones para levantar una demanda indígena que le sirva de base programática. Dos caminos se diseñaron para lograr este objetivo: el primero, generar un “Plan Estratégico de Desarrollo Andino” (PEDA), con amplia participación de la base social (las comunidades y asociaciones indígenas), y; en segundo lugar, generar “Congresos Aymaras”, como un medio para validar el PEDA. Por otra parte, los congresos tendrían además una función simbólica de primer orden: en la medida que se realizaban en las ciudades, y debido a la alta convocatoria de dirigentes, eran un buen instrumento para que éstos y funcionarios de CONADI posicionaran la temática en los servicios públicos de la región, entre los cuales la CONADI tenía problemas de legitimidad.

Se problematiza, además, sobre los elementos arriba planteados, en relación con el carácter del movimiento aymara en el marco de su relación con la sociedad civil y el Estado. Se sostiene que el movimiento aymara tiene como ejes el desarrollo de una elite que busca implementar su acción desde el Estado, mediante su introducción en la estructura política de poder mediante el ingreso al Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, y luego a la estructura administrativa.

Metodología

La tesis de trabajo refiere a que el movimiento aymara tiene como ejes el desarrollo de una elite que busca implementar su acción desde el Estado, mediante su introducción en la estructura política de poder mediante el ingreso al Partido por la Democracia y la Democracias Cristiana, y luego a la estructura administrativa del Estado mediante su participación en la CONADI. Esta participación, en el plano regional, estuvo mediada por la inserción de los distintos sectores del movimiento indígena en estos partidos, pero a su vez por la incorporación sus principales dirigentes en la entidad estatal, inaugurando un carácter dual de la Corporación, como administradores de la política indígena del Estado en la región, a la vez que articuladores de la demanda indígena de la cual debía dar cuenta la política estatal. Se propone que el debilitamiento del movimiento indígena en el período se debe a la crisis de este tipo de relación con el Estado.

Respecto a la pregunta de trabajo, esta está relacionada con lo siguiente: El tipo de estrategia desarrollado por la elite política aymara les permitió posicionarse en el aparato estatal y fue reconocida mediante la creación desde éste de instancias participativas instrumentales, como los congresos aymaras y el Consejo Nacional



Aymara, pero, ¿esta estrategia les permite generar procesos consistentes de participación y representación que les posibiliten proyectar un crecimiento en instancias de poder de carácter representativo? La hipótesis de trabajo es que no. Los aymaras ya tenían representación en el ámbito municipal y, al ser la CONADI una instancia de representación regional, no reforzaba sus capacidades en ese ámbito. La dirigencia aymara se veía enfrentada a la exigencia de ampliar su representación hasta dicho ámbito, o sea, ser capaz de generar vínculos entre las instancias locales, elaborar las correspondientes propuestas y concordar e implementar estrategias políticas tendientes a lograr su satisfacción por parte de los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, debía ser capaz de obtener el respaldo o aprobación de las comunidades y organizaciones aymaras; esto es, mostrarse como una instancia efectiva de representación étnica. En último lugar, y desde la perspectiva de su alianza con la coalición gobernante, debía mostrar capacidad de influencia en la adhesión política de los electores aymaras, cuya votación históricamente ha favorecido a la derecha. En este aspecto, y a lo largo de las distintas elecciones llevadas a cabo desde el retorno a la democracia, las organizaciones aymaras y sus líderes han mostrado debilidades, manteniéndose la tendencia electoral que favorece a la derecha política, cuestión que debilitó su capital político con los partidos de la entonces Concertación de Partidos por la Democracia.

Resultados

En el plano regional, tenemos distintas perspectivas para abordar la discusión sobre la temática aymara. La visión clásica es la presentada por Van Kessel (1980 y 1985), quien analiza el tema a partir de un marco teórico analítico de matriz cultural, en donde el creciente contacto de los aymaras con las poblaciones de las urbes regionales, Arica e Iquique, generaría un intercambio cultural desigual que implicaría la pérdida progresiva de la identidad aymara, caracterizada por un conjunto de características culturales distintivas. Una postura distinta la podemos encontrar en Gundermann (2003), quien sobre la base de la posición relacionista respecto a la etnicidad desarrollada por Barth (1969), en contraposición a las posiciones “primordialista” y “estructuralista”, propone una identidad relacionista, dirigiendo el análisis a las interacciones sociales más que a los contenidos culturales puntuales. Gundermann nos señala que los espacios sociales andinos del norte de Chile han tenido una transformación constante, entre los que destacan la descomposición de las comunidades históricas y de las microrregiones campesinas, dando paso a las pequeñas localidades agrarias de los valles y a las comunidades sucesoriales con orientación pastoril de la alta cordillera., entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Un segundo proceso, iniciado es de mediados del



siglo XX, se da con el paso de microrregiones campesinas a la regionalización de las sociedades andinas, que configura el paso de neocomunidades andinas a comunidades translocalizadas. En este marco, aparece el desarrollo de un fenómeno nuevo, la ciudadanía étnica como factor característico de la integración a la nación, caracterizado a su vez por dos grandes momentos: transformación de la identidad indígena en la igualdad del ciudadano idealmente homogéneo e indiferenciado, y; búsqueda de una ciudadanía cultural y étnica emergente en los últimos años, evidenciando el fracaso del proyecto de integración por asimilación impulsado por el Estado y una parte de los propios aymaras desde principios del siglo XX.

Al respecto, Gundermann señala que si bien ya desde la década del '40 empieza a darse una representación andina en los gobiernos municipales, ésta no tenía el carácter de reivindicación de lo indígena, cuestión que vendría a darse con la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, en 1990, las elecciones municipales de 1992, la designación en ese entonces de consejeros regionales, CORE, y consejeros nacionales ante la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Para los intereses de nuestro análisis, destacamos la discusión planteada por el autor, a partir de la redefinición administrativa del espacio andino en el periodo de la dictadura militar, generando la municipalización del espacio andino, que tenía como objetivo intensificar la presencia del estado en las zonas andinas limítrofes, histórica y culturalmente afines a los países colindantes: Bolivia, Perú y Argentina. Los municipios adquieren un rol central en la reorganización de la producción, la sociedad y la política indígenas. En este marco, comenzaron a ser elegidos aymaras con experiencia en ser intermediarios entre las comunidades y el Estado, pero a su vez representaran realidades microlocales, con un sentido de representación directa característico de la representación en las comunidades andinas. Otra característica relevante es la representación aymara creciente en municipios con población andina significativa, aunque esto sigue circunscribiéndose al plano local. Este proceso de representación étnica cristalizaría con la creación de la CONADI, donde tanto desde el Estado como de los dirigentes que se insertaron en ella o que le prestaban servicios a ésta a través de proyectos, se comienza a configurar con más nitidez un discurso sobre la identidad étnica y la multiculturalidad. Este fenómeno no podría haberse desarrollado sin la formación de una incipiente intelectualidad y dirigencia aymara urbana con crecientes niveles de educación.



En lo que respecta a las organizaciones, Gundermann y Vergara (2009), nos señalan que existen tres formas históricas de organizaciones andinas: la primera, denominada de sustrato, es la comunidad andina, la que en el presente no obedece a una estructura tradicional; la segunda, son las organizaciones locales de base territorial, como las juntas de vecinos, las que usualmente se generan por inducción externa desde el Estado, que para su acción desarrollista supone referentes colectivos, tales como comités y juntas de adelanto hasta inicios de la década del '60, juntas de vecinos entre 1964 y 1970 bajo la administración demócrata cristiana, asentamientos campesinos y centros de reforma agraria en el gobierno de Allende, juntas de vecinos y centros de madres con fines de control político y canalización de algunos recursos en la dictadura militar, así como la creación de sociedades de pequeños productores campesinos, para finalmente en el retorno a la democracia dar continuidad a algunas modalidades de organización como las juntas de vecinos, reactivación de otras como las cooperativas, e innovar con otras como las comunidades y asociaciones indígenas, dando pie a un escenario de heterogeneidad, diferenciación y complejidad.

Los autores señalan que las organizaciones más persistentes son las organizaciones locales-territoriales de base comunitaria; en particular, las juntas de vecinos, apoyadas en el sustrato de cultura organizacional andino en el ámbito externo, así como por su capacidad de respuesta a las distintas entidades estatales, principalmente el municipio, en el ámbito externo, erigiéndose la comunidad local en un eje de estructuración del campo organizativo andino moderno.

La tercera forma histórica corresponde a la irrupción étnica incentivada desde el Estado, mediante la administración de la nueva política estatal por parte de dirigentes provenientes de organizaciones indígenas preferentemente urbanas. Complementariamente a la proliferación de organizaciones, la comunidad local concentra funciones y figuras organizativas, presionadas por un Estado que estimula la adopción de nuevas funciones cuya base la encuentra en los grupos locales, provocando a su vez una saturación de la organización local. Esta saturación ha generado una serie de problemas, entre los que se puede señalar; traslape funciones y organizaciones compuestas sobre la misma base comunitaria; baja eficiencia debido a la demanda de participación agrupada por parte del Estado asociada al aumento de la oferta estatal; deterioro y desuso de la inversión pública por la ausencia de competencias técnicas y capacidades de gestión de las organizaciones; profundización de fisuras, divisiones y conflictos internos debido a las estrategias de los grupos internos por el



acceso a recursos del Estado, aumentando las dificultades para una acción estatal expedita; aumento de dependencia del Estado por parte de las organizaciones, especialmente las instrumentales cuya sustentabilidad depende de condiciones externas. Esta dependencia sería en una doble dirección, ya que desde el estado se necesitan beneficiarios de sus líneas de desarrollo, generándose una sobreoferta de proyectos y recursos, lo que sería utilizado por la dirigencia para mejorar sus posiciones de negociación.

El único antecedente que se tiene sobre análisis en extenso del Consejo Nacional Aymara como supra organización representativa, lo podemos ver en Bascuñán (1998), quien en la provincia de Arica y Parinacota identifica organizaciones sociales y culturales, hijos de pueblos, centros juveniles, religiosas y folclóricas, económicas, y reivindicativas. Entre estas últimas destaca Pacha Aru, surgida en la Universidad de Tarapacá bajo el nombre de CEADI, identificándola como el brazo político de las organizaciones aymaras., desde el periodo 1988 – 1994, fecha a partir de la cual comienza a perder espacios de representatividad al ser progresivamente reemplazada por las comunidades y asociaciones indígenas creadas al amparo de la Ley Indígena y por el Consejo Nacional Aymara en el rol de representación política. Destaca también la Comisión Aymara de Defensa del Medio Ambiente y la Asociación Gremial de Propietarios Andinos de la Provincia de Parinacota e Iquique.

En este contexto, analiza el surgimiento de las ONG's, las que a fines de la década del '70 y comienzo de los '80, comienzan a desarrollar talleres y centros de investigación orientados a la temática andina con provisión de recursos financieros externos. Estas, si bien habrían promovido la temática indígena, habrían desarrollado estrategias asistencialistas sin contemplar entre sus equipos profesionales a los aymaras, los que serían mano de obra barata. Para Bascuñán, el impacto de las ONG's, más que en plano productivo que identifica como escaso, estaría en que posibilitaron el surgimiento de nuevas organizaciones aymaras y a la vez algunas ONG's dirigidas por indígenas que incorporarían el componente étnico a sus propuestas. Este rol habría sido fundamental para los intentos federativos de las organizaciones aymaras, constituyendo el brazo técnico de éstas.

A partir de este análisis, describe los distintos congresos aymaras, el primero en 1996, el segundo en 1997, en cuyo marco se creó el Consejo Nacional Aymara, CNA, no como necesidad de las bases sociales, sino por la visión de los líderes dirigentes que identificaban la necesidad de tener una representación única frente al Estado. El tercer



congreso, de 1997, renovó el CNA y habría constituido una consolidación de la organización y el inicio de una etapa de formalización. Sin embargo, Bascuñán identifica también debilidades de esta supra organización, como falta de capacitación y liderazgo de algunos dirigentes, falta de recursos económicos para ejercer el cargo y falta de compromiso de las organizaciones de base con el CNA, entre otros. Finalmente, Bascuñán ve al CNA como el último hito de un proceso organizacional desde la década del '60 con la migración aymara a las ciudades, pasando por la década del '80 con la aparición de la corriente del indianismo en Chile, a la que identifica como precursora del movimiento aymara. Podemos apreciar en la lectura que hace Bascuñán una identificación de este proceso organizacional como un movimiento en constante crecimiento, el que se reflejaría en la aparición de organizaciones que cada vez aumentan su radio de representación.

Conclusiones

En lo que respecta a nuestro propio análisis, en síntesis, pudimos observar una primera etapa de efervescencia del movimiento indígena, el que se organizaba en torno a organizaciones de carácter local o gremial. Esta capacidad dirigencial fue aprovechada como un imput político por la Concertación de Partidos por la Democracia en la campaña por la elección del candidato Patricio Aylwin. Comienzan a tomar relevancia las agrupaciones indígenas asentadas en la zona urbana, hegemónicas por líderes de una segunda generación de migrantes más ilustrados, con claras diferencias entre los líderes de la zona de Arica, formados en la Universidad de Tarapacá y organizados en Pacha Aru, y los líderes de la Provincia de Iquique, con clara ascendencia aún en sus zonas rurales, agrupados en Aymar Marka, donde su líder, Gumercindo Mamani, solo tenía estudios secundarios.

En esta etapa, de conformación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI como consecuencia del Acuerdo de Nueva Imperial, que tenía como misión generar la propuesta de una Ley Indígena y la institución estatal que la implemente, los líderes de Iquique lograron instalar a uno de los suyos como cabeza de la Comisión: Antonio Mamani, quién era hermano de Gumercindo y un dirigente de segunda línea en ese entonces, pero que tenía un título técnico del que Gumercindo carecía.

Clave en este proceso, fue la participación de distintas ONG's que trabajaban la temática indígena y tenían años de experiencia en el trabajo con las comunidades indígenas, mediando entre éstas y la cooperación internacional a través de la implementación de distintos proyectos sociales y productivos. Estas ONG's no



circunscribían su papel solo a la temática indígena, sino que también a otras temáticas de interés social general en el marco de un proceso de profundo cambio en el sistema sociopolítico: la recuperación de la democracia. Esta cooperación significaba un soporte técnico para las discusiones de la CEPI lideradas por los líderes de las organizaciones indígenas, período en el cual la participación de estas organizaciones era muy activa.

Distinguimos una segunda etapa de entrada en régimen de CONADI, donde los principales líderes indígenas pasaron a ser parte de la institucionalidad estatal, junto con profesionales de las ONG's que habían sido parte del trabajo conjunto en la etapa anterior. Sin embargo, esta etapa marcó dos hechos relevantes: por una parte, las organizaciones indígenas de base, que vieron partir a sus principales líderes a la institucionalidad estatal, debieron asumir el desafío de la renovación dirigencial y la pérdida de incidencia directa en la institución; por otra parte, se pierde la colaboración con las ONG's, diversos cuestionamientos mediante, las que son reemplazadas por "consultoras indígenas" como el nuevo "brazo técnico" de la dirigencia aymara. Los líderes aymaras instalados en la CONADI, ven en este marco la necesidad de crear un referente de representación indígena de carácter regional y nacional, para lo cual primero se abocan a implementar una estrategia de levantamiento de la demanda indígena, que tuvo como hito el Plan de Desarrollo Aymara. Este señalaba en sus propuestas organizacionales un Consejo Nacional Aymara, del que los líderes aymaras instalados en la CONADI impulsaron su creación y funcionamiento a través de la implementación del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. En este proceso, en el que inicialmente tuvieron un rol clave las consultoras aymaras, éstas, ya sea por resultados o por problemas de gestión internos, fueron desapareciendo progresivamente de la gestión de proyectos de CONADI, evidenciando con ello el fracaso de esta estrategia de creación de un brazo técnico del movimiento, aspecto que facilitó la entrada de consultoras no indígenas, que lejos del compromiso que tuvieron en sus respectivas etapas tanto las ONG's como las consultoras indígenas, solo veían en la CONADI un nicho de mercado de iguales características que otros que exploraban en un creciente mercado de consultorías estatales en el nuevo gobierno democrático.

La tercera etapa se inicia en 1998. En ella se produce una creciente ruptura del consenso entre la dirigencia indígena y el gobierno, lo que tiene su mayor expresión en la salida del Director Nacional de CONADI, Domingo Namuncura, por oponerse a las permutas de las tierras pehuenches a favor de la instalación de la represa de Ralco, bajo el Gobierno de Eduardo Frei, lo que lleva a la reformulación de CONADI como una



institución estatal, discurso que se mantiene durante el mandato presidencial de Ricardo Lagos. Al mismo tiempo, se van estableciendo nuevas alianzas clientelares con sectores indígenas excluidos por la administración anterior. La acción de CONADI se caracteriza en este período por un enfoque sectorial, ausente de una discusión sobre ejes del desarrollo aymara que integren sus distintas dimensiones.

Por otra parte, CONADI da inicio al trabajo con otras instancias públicas, cuyo acercamiento fue proporcional al distanciamiento con el movimiento indígena, que pasa a ser considerado como su contraparte política, mientras que las cuestiones técnicas serían de injerencia exclusiva de la Corporación. Ello se ve reflejado en el tratamiento del Área de Desarrollo Indígena "Jiwasa Oraje", para lo cual se crea un "Plan Director" que regula el trabajo mancomunado de los servicios públicos en la región y se definen demandas sectoriales por territorio. El plan considera, además, la creación de un Consejo Directivo del ADI donde tienen representación paritaria los organismos públicos y los representantes indígenas territoriales, cuya función es velar por el cumplimiento de las demandas sectoriales. Como consecuencia de este proceso, se generan nuevas alianzas partidistas que desplazan a la dirigencia indígena del período anterior. El Consejo Nacional Aymara participa con un representante en el Consejo, por lo que su participación es meramente nominal, lo que implica un desplazamiento progresivo de poder desde el Consejo Aymara al Consejo Directivo del ADI.

Todo este proceso, sin embargo, aparece marcado por la reincorporación de elites políticas indígenas desplazadas durante el período anterior, no existiendo un recambio generacional de éstas. El trabajo de elaboración de la demanda del ADI sigue las mismas pautas del proceso anterior, en detrimento del fortalecimiento de las redes organizacionales indígenas dentro de sus territorios. La incorporación a las ADI's se convierte, en cambio, en un medio de incorporar a la gestión pública regional una élite política aymara que, si bien se esgrime como representante de una "base indígena regional", hace descansar su acción en su capacidad de articulación con el Estado. Por ende, en lo que compete al movimiento aymara, a partir de este momento, sus principales desafíos estarán orientados a su inserción en el campo de la administración estatal, perdiendo foco respecto a la incidencia en la sociedad civil chilena y el cambio sociocultural que demandaba el empoderamiento de la sociedad aymara, en la región en particular, y los pueblos indígenas a nivel nacional.

En lo que respecta a los aspectos del marco teórico, podríamos decir que en la primera etapa, las organizaciones aymaras formaban parte de un Movimiento Societal amplio,



MS, en la mirada de Garretón, en el que su articulación con las ONG's permitía el vínculo con la sociedad chilena en el proceso de cambio sociocultural que implicaba la ruptura con la dictadura militar para recomponer un estado democrático, que veía con buenos ojos la diversidad de nuevos grupos emergentes, entre los que estaban los pueblos indígenas. Podríamos señalar que este era un movimiento que se movía desde las organizaciones indígenas hacia la sociedad, buscando incidir y ser parte de esa nueva conformación sociopolítica.

En la segunda etapa, de inserción de los líderes indígenas en la institucionalidad estatal, estaríamos, aún en la mirada de Garretón, ante un movimiento social, ms, acotado a incidir en el Estado en función a canalizar recursos de éste hacia la población indígena, mediante la creación de un referente que gestionara la demanda ante los organismos estatales, donde ambos procesos, generación de la demanda y gestión de ésta, fueron impulsados y monitoreados desde la misma CONADI a través de los instrumentos que la orgánica institucional proveía. Al contrario de la etapa anterior, estaríamos aquí en un movimiento desde el Estado hacia la población indígena y las organizaciones que la representaban. Con ello, sus líderes, más que liderar un movimiento que buscara un cambio societal, se convirtieron en líderes de grupos de presión, en la perspectiva de Meynaud, que buscaban canalizar los recursos del Estado, debilitando su influencia política más global en el conjunto de la sociedad.

En la tercera etapa, con la irrupción del Área de Desarrollo Indígena y su correspondiente Consejo de administración, si bien comenzó el debilitamiento de la estrategia de los líderes de la etapa anterior y un recambio de los liderazgos, el modelo profundizó el camino ya comenzado en la etapa anterior: el desdibujamiento de los cambios culturales que promovían las organizaciones aymaras en alianza con las ONG's en el periodo pre – CEPI y CEPI, en una articulación sectorialista de demandas expresadas en la Estrategia de Desarrollo Aymara y en las propuestas del ADI, en las que en la diversidad de propuestas por área de gestión estatal se perdió el foco de la propuesta de cambio global societal.

Finalmente, en lo que respecta al Consejo Nacional Aymara en el contexto de las organizaciones indígenas, podemos señalar que esta supra organización, al contrario de lo que planteaba Bascuñán, no representó el último hito de un crecimiento organizacional progresivo del movimiento aymara, en parte por las mismas debilidades que éste indica. Siguiendo a Gundermann y Vergara, que señalan que la comunidad local sigue siendo el eje estructurante de las organizaciones aymaras, podríamos



conjeturar que éste factor es en sí una restricción de importancia a la hora de generar supra organizaciones que traspasen estas fronteras. De alguna forma, a pesar de la ampliación de los espacios de acción de las organizaciones aymaras desde lo local a lo regional, esta capacidad sigue basándose en los lazos territoriales y familiares acotados.

Bibliografía

Bascuñán, Eduardo (2001) "Sistematización del movimiento social aymara, provincias de Arica y Parinacota, período 1960-2000". CONADI. Arica, Chile.

Bengoa, José (1990) Breve Historia de la legislación indígena en Chile. Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI. Ministerio Secretaria General de Cultura. Santiago, Chile.

Bengoa, José (1997) "Los indígenas y el Estado nacional en América Latina", en: Identidades étnicas. Gutiérrez, Manuel (Compilador) Casa de América de Madrid. Madrid, España. pp. 67-93.

Choque, Carlos (2009) Divergencias y antagonismos del movimiento social indígena en la Región de Arica Parinacota (1965 – 1985), en CONFLUENZE Vol. 1 N° 2, pp 267-289, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne, Università di Bologna, 2009.

Consejo Nacional del Pueblo Aymara (1999) "Estrategia de desarrollo aymara". CNA, Iquique. Chile.

----- (2000) "Consejo de Masllkus, CNA Operación 2000 – 2001 Objetivos y Organización".

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (1997) "Contribución a la historia de la propiedad aymara". Gundermann, Hans y González, Héctor. CONADI. Santiago, Chile.

----- (1999) "Informe Preliminar Área de Desarrollo Indígena Aymara Provincia de Iquique"

Fundación OCAC (1999) "Informe Final Cumplimiento de Programa Apoyo Al Fortalecimiento de la Sociedad Civil Aymara, Provincia de Iquique".

González, Héctor y Guerrero, Bernardo (Editores) (1990) "Desarrollo andino y cultura aymara en el norte de Chile". Taller de Estudios Aymaras TEA/Centro de Investigación de la Realidad del Norte CREAR. Iquique, Chile

González, Julián (1988) Vengo de la cordillera al mar. Migrantes aymaras en Iquique. CREAR, Iquique, Chile.

González, Sergio (1995) "El Estado chileno en Tarapacá: el claroscuro de la modernización, la chilenización y la identidad regional", en: Diálogo Andino. N°13. Universidad de Tarapacá. Arica, Chile. pp. 79-89.



Gundermann, Hans (1998) "Comunidad aymara, identidades colectivas y estados nacionales en los albores del siglo XX", en: A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique. Artaza, Pablo et al. DIBAM. Santiago, Chile. pp. 163-181.

_____ (1999) "Categorías de identidad en el discurso popular urbano del norte de Chile", en: Estudios Atacameños N°17. Universidad Católica del Norte. San Pedro de Atacama, Chile. pp. 25-32.

_____ (2000) "Las organizaciones étnicas y el discurso de la identidad en el norte de Chile (1980-2000)", en: Estudios Atacameños N° 19. Universidad Católica del Norte. San Pedro de Atacama, Chile. pp. 75-91.

_____ (2003) "Las poblaciones indígenas andinas de Chile y la experiencia de la ciudadanía", en: Mapuches y Aymaras. El debate en torno al reconocimiento y los derechos ciudadanos". Gundermann, Hans, Foerster, Rolf y Vergara, Jorge Iván. RIL Editores. Santiago, Chile. p.p. 9-104.

Van Kessel, Juan (1985) Los Aymara contemporáneos de Chile (1879-1985). CREAR. Iquique, Chile.

Vergara, Jorge Iván, Gundermann, Hans (2009), Comunidad, organización y complejidad social andinas en el norte de Chile, en Estudios Atacameños, Arqueología y Antropología Surandinas, N° 38, pp 107 – 126.

Vergara, Jorge Iván, Gundermann, Hans y Foerster, Rolf (2004) "Más acá de la legalidad. La CONADI, la ley indígena y el pueblo mapuche (1989-2004)". en: Revista Polis N°8, Universidad Bolivariana. Santiago, Chile. pp. 381-405.

Vergara, Jorge Iván, Gundermann, Hans y Foerster, Rolf (2005) "Instituciones mediadoras, legislación y movimiento indígena de DASIN a CONADI". Atenea. Editorial Universidad de Concepción. Chile



Criminalización y resistencias: Análisis de experiencias de luchas territoriales en el norte de la Patagonia.

Mariana Andrea Giaretto

Resumen

La ofensiva extractivista es la expresión particular de la actual mundialización del capital en América Latina. En los últimos años, las luchas territoriales se han profundizado, revelando la centralidad de la territorialidad en los conflictos socio-políticos. Por eso esta investigación propone analizar las relaciones entre las luchas territoriales y el Estado durante la última etapa del kirchnerismo (2009-2015) en el norte de la Patagonia argentina.

A través de una estrategia metodológica combinada de análisis de fuentes secundarias y de registro de fuentes primarias, se analizarán los procesos de criminalización y resistencia de experiencias de tomas de tierras, de defensa de territorios indígenas y de luchas socio-ambientales, reconstruyendo al mismo tiempo los procesos de formación de subjetividades socio-políticas.

Los resultados apuntan a una caracterización de los procesos de formación de subjetividades socio-políticas forjadas en las experiencias de resistencia, identificando y distinguiendo procesos de resistencia subalterna y de resistencia antagonista el marco de la dominación estatal. Recuperamos formas de resistencia que a partir de la criminalización se configuran como antagonistas y despliegan estrategias que tienden a una articulación ofensiva contra el capital y su modo de dominación política vigente. Entre dichas estrategias podemos identificar: la producción de contra-información que contrarreste la estigmatización, la disputa jurídica-política en los procesos de judicialización y el bloqueo territorial en las situaciones de militarización. De este modo, nos proponemos discutir las implicancias de la criminalización como política de estado y los límites y alcances de las experiencias de resistencias en los territorios.

Palabras clave

Criminalización; Luchas territoriales; Estado; Formas de resistencia; Patagonia.

Breve introducción

Este trabajo es parte de un proceso de investigación más amplio, por lo que aquí presentamos sólo una parte del análisis realizado¹, aquel que se vincula directamente con la tensión entre procesos criminalización y experiencias de resistencia en luchas



territoriales en el norte de la Patagonia argentina (Puel Mapu) durante la última etapa del gobierno kirchnerista 2009-2015.

En el norte de la región patagónica los conflictos territoriales se profundizaron en los últimos años del kirchnerismo, en la medida que se agudizó el impacto de la ofensiva extractivista vinculado particularmente a la actividad hidrocarburífera y a un Estado que promovió, garantizó y participó activamente dichas actividades.

Sin embargo, la crisis financiera internacional, el conflicto con el campo y luego la crisis energética impactaron en la disponibilidad de recursos para sostener el carácter redistribucionista de la intervención política, revelando y definiendo los límites del arbitraje estatal kirchnerista en los conflictos sociales, y agudizando la tensión entre la compensación económica y la criminalización como políticas de Estado.

Fundamentación del problema

Cuando analizamos contra quién luchan lxs sujetxs que resisten la ofensiva extractivista del capital, por lo general, aparece el Estado como principal interlocutor de demandas y como generador de intervenciones en los conflictos. Por eso, conceptualizamos al Estado como el modo de organización de la dominación política del capital (Jessop, 1980), como un modo de existencia de las relaciones sociales capitalistas, visibilizando su carácter represivo (Hirsch, 2017), reconociendo a la violencia como fundadora y conservadora de derecho (Benjamin, 2001), y entendiendo a la selectividad de ilegalismos (Foucault, 1989) como puntapié para la configuración de una cadena punitiva criminalizadora de la subalternidad (Daroqui, 2012; López, 2015).

En términos conceptuales, abordamos la criminalización desde una perspectiva amplia que la entiende como una *estrategia política* que transforma a las luchas en crímenes y a quienes luchan en criminales. Es una estrategia compleja que suele incluir procesos de *estigmatización* de lxs sujetxs, de *judicialización* de los conflictos y/o de *militarización* de los territorios en los que se despliegan las luchas (Korol y Longo, 2009). Asimismo, es posible distinguir dos momentos: el de la *criminalización primaria* que implica la elaboración de las reglas de penalización y despenalización, y el de *criminalización secundaria* que consiste en los procesos de aplicación de dichas reglas (Baratta, 2004, p. 95). Desde esta perspectiva, el carácter selectivo del sistema penal abstracto es acentuado por los procesos de criminalización secundaria, es decir que la selectividad de quienes legislan es agudizada por quienes ejercen el poder policíaco.



Lo cierto es que, en los últimos años en Argentina, esa selectividad se orientó a los conflictos territoriales, con un fuerte impacto en la región norte de la Patagonia: mientras que el 42% del total de los conflictos criminalizados involucran cuestiones territoriales, las provincias norpatagónicas de Río Negro y Neuquén son las provincias que más criminalizan luego de Buenos Aires y CABA².

Es en este contexto, presentamos un análisis acotado de algunas experiencias de resistencia vinculadas a procesos de criminalización, tomando como referentes empíricos luchas por tierra y vivienda (B° Obrero, 2009, Cipolletti, Río Negro), luchas socioambientales (episodio de protesta y represión por el Acuerdo YPF-Chevron, 2013, Neuquén) y luchas por derechos territoriales indígenas (Conflicto Comunidad Winkul Newen, 2015, Neuquén). Lejos de la perspectiva de estudios de caso, proponemos una lectura oblicua de estas experiencias reconstruyendo la tensión entre modos de resistencia y procesos de criminalización.

Nos interesa detenernos y acercarnos a procesos de subjetivación política en los que las experiencias de resistencia a la ofensiva extractivista del capital manifiesta un rasgo antagonista de la acción política, asumiéndolo en tanto rasgo distintivo y decisivo de la lucha y la experiencia de la insubordinación como factor de subjetivación política (Modonesi, 2016: p.12). Se trata entonces, de acercarnos a procesos de formación de subjetividades socio-políticas al calor de experiencias de resistencia que sufren la criminalización como política de Estado.

(...) esa primera experiencia de criminalización y judicialización va a tener en el conjunto de esas comunidades un análisis interesante de cómo se empieza a generar una resistencia activa, tanto en la represión directa como en la represión a través de la judicialización del conflicto y también dar un ejemplo de cómo uno debería actuar ante todo los casos de criminalización más allá de las diferencias políticas que tenga (...) El caso de Winkul Newen marcó algo que después la represión a Pu Lof en Resistencia de Cushamen llevaría a rupturas políticas mucho más grandes o a avances mucho más grandes, porque hoy por hoy nadie se atrevería a decir nadie se atrevería a decir nuevamente de que no merecen ser apoyados determinados mapuches con sus luchas territoriales porque no son mapuches. (Activista antirrepresiva, 2/07/2019)

Aquí aparecen dos ejes de análisis relevantes que retomaremos en el apartado de análisis teórico-empírico: los procesos de criminalización como arena de desenvolvimiento de formas de resistencia más activas y, además, cierta acumulación



política en las experiencias que permite complejizar los vaivenes entre la subordinación y la insubordinación (Modonesi, 2006).

Desde esta perspectiva, nos proponemos analizar experiencias de criminalización de resistencias en una doble clave: en tanto *resistencias subalternas* caracterizadas por la fragmentación de demandas, de sujetos y de modos de accionar que tienden a la subordinación de las luchas al modo de dominación política hegemónico del capital, en tanto *resistencias antagonistas* criminalizadas caracterizadas por una articulación ofensiva de las diversas luchas territoriales destinadas a trastocar la correlación de fuerzas dominante a través de ciertas estrategias: la producción de contra-información que contrarreste la estigmatización, la disputa jurídica-política en los procesos de judicialización y el bloqueo territorial en las situaciones de militarización.

Metodología

El enfoque de esta investigación se enmarca en una concepción integral de la teoría y el método, en la medida que el proceso de investigación es abordado como una unidad en la que se amalgaman momentos teóricos y técnicas de recolección de datos. Desde esta perspectiva teórico-metodológica, las luchas territoriales son manifestaciones del proceso histórico y permanente de lucha de clases, y el Estado es expresión de relaciones sociales capitalistas.

En la medida que estas luchas se visibilizan a través de conflictos concretos, además de su historicidad, debemos recuperar las visiones de los grupos subalternos que nos permita identificar cómo se da la configuración de sus subjetividades políticas forjadas al calor de las experiencias colectivas de lucha.

En esta dirección, nuestra estrategia metodológica es cualitativa y combina técnicas de tipo documental y de tipo vivencial (Calello y Neuhaus, 1999). Entre las primeras rastreamos aportes de investigaciones previas, documentación oficial tales como expedientes y sentencias judiciales, y artículos en medios de comunicación acerca de la temática. Entre las técnicas de tipo vivencial, generamos instancias de investigación participante, y al mismo tiempo, a través de entrevistas en profundidad completamos la reconstrucción narrativo-histórica de los procesos sociales (Sautu et. Al., 2005), recuperando las interpretaciones de lxs sujetxs protagonistas³. En el caso de funcionarios estatales se realizan entrevistas semi-estructuradas, que de un modo flexible recuperan la perspectiva de los sujetos en un marco de reinterpretación y repregunta (Idem).



Análisis teórico-empírico y resultados

Los resultados alcanzados por esta investigación, contribuyen al campo de los estudios territoriales desde una perspectiva crítica anclada en el análisis del Estado y los conflictos socio-políticos. Proponemos un análisis de las relaciones entre luchas territoriales y modos de intervención estatal en el norte de la Patagonia argentina durante la última etapa del kirchnerismo (2009-2015), generando conocimiento contextualizado a modo de coordenadas de mapeos colectivos que sirvan para la articulación política de las experiencias de tomas de tierras, de defensa territorial indígena y de luchas socio-ambientales.

También, identificamos algunos de los modos de intervención del Estado en diversos conflictos territoriales, y focalizamos particularmente en los procesos de criminalización de las luchas territoriales que ofrecen resistencia a la ofensiva extractivista del capital en esta región. Identificamos las distintas estrategias en el proceso de criminalización: estigmatización, judicialización y militarización desde experiencias concretas de resistencia territorial.

Dados los límites de este trabajo, no podemos desarrollar aquí con detalle el planteo completo acerca de los procesos de criminalización que hemos desplegados en otros trabajos⁴, aquí los retomamos y complementamos planteando que abordamos a la criminalización como una iniciativa de las clases dominantes que opera a contrapelo de las tendencias antagonistas y autónomas (Modonesi, 2016) planteadas por las luchas territoriales, generando reconfiguraciones de las relaciones de mando-obediencia que atraviesan a los procesos de subjetivación política. Lo que aparece con claridad en el testimonio de una de las entrevistadas en relación a la experiencia del B° Obrero en Cipolletti, Argentina, desde 2009.

(...) ellos venían con un trabajo de autonomía territorial que se basaba en resolver problemas cotidianos, pero del conjunto del barrio, que a diferencia de otros trabajos territoriales que habíamos tenido experiencia. Lo que era imponente era la masividad de la participación del barrio, y en eso se veía que habían estructuras del conjunto... un barrio organizado en virtud de garantizar cuestiones de subsistencia, los servicios, la lucha por toda la mejora en la dignidad de la vida... y por otro lado, la defensa frente a la criminalización estatal y al intento del desalojo permanentemente y este permanente estado de criminalización (...). (Activista antirrepresiva, 2/07/2019)

En esta experiencia de toma de tierra y del despliegue de prácticas antagonistas y autónomas, las clases dominantes operan a través de procesos de criminalización que



intentan reconfigurar las relaciones de mando y obediencia, y lo hacen combinando estrategias de estigmatización, judicialización y militarización. Aquí nos interesa identificar cómo se expresan las resistencias, por eso rastreamos experiencias de producción de contra-información frente a la estigmatización, experiencias de disputa jurídica-política ante la judicialización y experiencias de bloqueo y control territorial ante la militarización territorial.

Contra-información frente a la estigmatización

En ese sentido, la criminalización opera estigmatizando a quienes luchan, etiquetándolos de criminales cuya peligrosidad – en clave foucaultiana- apunta más bien a la virtualidad de lo que son capaces de hacer, que al delito que supuestamente cometieron. Frente a la estigmatización que activan y sostienen medios de comunicación y funcionarios públicos, las experiencias de luchas anteponen prácticas de contra-información que intentan desactivar los estigmas.

Nosotros nos definimos como un espacio antirrepresivo y nuestra tarea principal es acompañarnos y pensar en conjunto respuestas frente a la represión estatal... empezamos a implementar la herramienta de la transmisión radial de determinadas instancias judiciales que nos permiten a través de las redes sociales difundir lo que transcurre en un juicio, pero también poder expresar un montón de voces, de lo que pasa alrededor de un juicio: la presencia de referentes de derechos humanos, de instituciones que uno obliga a tomar una posición frente a la represión, empiezan a tomar un valor en ese micrófono, cuando te querés dar cuenta empieza formar parte de la prueba que juega en una decisión, y sobre todo, esa ha sido nuestra experiencia en los tribunales populares, que mucho tiempo se los criticó acusando que el sentido común sí es reaccionario, facho que esto y que lo otro... el discurso de los medios hegemónicos, pero pocas veces se intenta generar un discurso diferente y plantear una discusión en estos ámbitos... la experiencia humilde nuestra es que cuando uno se dispone a dar la discusión en esto ámbitos, tiene todas las posibilidades de ganarla. (Activista antirrepresiva, 2/07/2019)

De este modo, producir contra-información para desactivar procesos de estigmatización, se inscribe como una práctica política que habilita la construcción de aquellos núcleos de buen sentido (Gramsci, 1978) que contrarrestan al sentido común en la reproducción reaccionaria de la criminalización, incluso incidiendo políticamente en el devenir del proceso judicial.



Disputa jurídico-política ante la judicialización

En cuanto a la judicialización de los conflictos, claramente es un mecanismo a través del que el Estado deslocaliza el conflicto para diseccionarlo a través de la maquinaria burocrático-judicial. Uno de sus primeros efectos es la pérdida del control espacial y temporal del conflicto por parte de lxs sujetxs que luchan, que ahora requieren de una mediación experta para acceder parcialmente al expediente en el que se diseña la individuación y la ejemplaridad del caso.

La judicialización lo que implica no es sólo la posibilidad de ir preso, sino también la necesidad de tener que dar la pelea en un ámbito que es totalmente ajeno y que incluso para poder darla necesitas una herramienta que es un abogado porque no la podés dar vos por tus propios medios. No es una mesa de diálogo política, sino que necesitás un técnico que sea el abogado para que te tenga que representar (...) Lamentablemente la experiencia de los pobres con los abogados es bastante triste, porque son causas que llevan muchos años (...) es una pelea muy larga política que si no se sostiene desde lo jurídico con alguien que no transe ni se venda es una pelea perdida. (Activista antirrepresiva, 2/07/2019)

En 2013 en la provincia de Neuquén se encontraban vigentes 42 causas penales que involucraban a 241 mapuches en conflictos por territorios afectados por actividades petroleras (Pérez Roig, 2014). Sin lugar a dudas, a partir del boom de Vaca Muerta estos conflictos se han multiplicado y con ellos también la intervención estatal a través de la judicialización.

(...) ellos entienden que los mapuches están pasando el límite siempre y como están pasando el límite y ponen en riesgo un modelo basado en la explotación de recursos naturales, buscan escarmentarlo, buscan controlarlo, buscan ponerle límites y la manera que a través lo hacen es judicializar y criminalizar la demanda mapuche, nosotros decimos, no hay problema criminalizan, judicializan y nos veremos en los tribunales, pero nos damos cuenta de que el poder judicial tampoco está a la altura, entonces estamos en un problema porque el Estado en vez de resolver políticamente la cuestión mapuche la criminaliza y dice esto es un problema judicial no un problema político. Cuando vamos a la justicia, vemos que los jueces responden a otros intereses, dejan de lado la Constitución, dejan de lado las leyes y te condenan, entonces ahí está el problema realmente. (Referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, 26/08/2019)

Al mismo tiempo, Cipolletti en tanto ciudad intermedia que recibe directa e indirectamente el impacto de la explotación de hidrocarburos no convencionales, mantiene a aproximadamente 20.000 de sus 85.000 habitantes (CENSO, 2010)



habitando precariamente en casi 40 tomas de tierras. La gran mayoría de estas tomas se encuentran en tierras privadas con procesos judiciales abiertos promovidos, en algunos casos, por el gobierno municipal. Por eso, ante la judicialización es necesario dar la disputa jurídico-política, desandando uno a uno los dispositivos jurídicos y politizando la judicialización.

Si bien no podemos detenernos demasiado en este punto, es importante recordar que la separación entre economía y política en la que se funda el Estado capitalista, no es un acto histórico que sucede solo una vez, sino que es constantemente reproducida y, que para ello, se desenvuelve la forma del derecho y la función básica de una fuerza coercitiva extraeconómica en relación permanente a la lucha de clases que encuentra su expresión política en el estado burgués (Blanke, Jürgens y Kastendiek, 2017: p.18).

En este sentido, la doble función de la violencia de fundar derecho y de conservar derecho (Benjamin, 2001) es reeditada una y otra vez, y el carácter represivo del derecho queda al descubierto cada vez que se ve en la necesidad de legitimar el ejercicio de la coerción física para garantizar la dominación política de una clase sobre el resto de la sociedad. Este es el problema que revela la criminalización de las luchas territoriales, en la medida que expone al Estado como una estructura concreta que se constituye como una fuerza general de coerción separada de las clases, que incluso está dispuesta a confrontar con los intereses particulares en pos de garantizar al derecho como forma de existencia de las relaciones sociales capitalistas (Blanke, Jürgens y Kastendiek, 2017). Cuando a través del derecho, un conflicto territorial es transformado en delito, el carácter represivo del Estado en tanto fuerza de clase queda al descubierto arriesgando su propia legitimidad, riesgo intrínseco e inevitable de la función coercitiva del Estado en una sociedad capitalista. Un riesgo que queda claramente evidenciado en el siguiente relato:

Las luchas territoriales son el eje de la lucha de los pueblos indígenas (...) En Argentina, hay más de 30 pueblos indígenas con una plataforma de derechos impresionantes, constitucional, pacto internacional, jurisprudencial, la Corte Interamericana, tenemos derechos a patadas para aplastar a cualquier juez, y sin embargo, no se aplican, entonces hay una permanente práctica de eludir, de evitar, entonces vemos a un Estado, cuando digo Estado, a un poder ejecutivo, judicial y legislativo que son conscientes sobre ello, pero buscan de todas las formas evitar aplicarlo para no modificar el estado de situación de un modelo capitalista que necesita los recursos naturales para sobrevivir. La sangre de este sistema son los recursos naturales y eso está en los territorios indígenas, entonces no es sencillo para ningún gobierno sea de derecha como el que



padecemos ahora, o sea un gobierno progresista como el que pasó y el que puede llegar a venir (...) para ellos los delincuentes somos nosotros, los terroristas somos nosotros, los que no respetamos a la república somos nosotros, y nosotros vivimos sosteniendo que no hay lucha más justa, ni lucha más legal que la de los pueblos indígenas. (Referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, 26/08/2019)

Particularmente, la experiencia de criminalización y resistencia de la comunidad Winkul Newen logró politizar el mecanismo de judicialización, cuestionando la habitual clausura y opacidad del ámbito judicial.

(...) planteamos la necesidad de intérprete en todas las audiencias, no por una cuestión de comprensión sino de derecho no solo de ellos sino de todas las comunidades (...) el planteo fue parte de la estrategia, para politizar el caso. El caso estaba siendo tratado como una tentativa de homicidio, como un delito común. Nosotros veíamos la necesidad de plantear el caso desde otro lugar, no desde la defensa estrictamente técnica, sino técnica política. (Abogado de la comunidad Winkul Newen, 9/5/2018)

Una defensa técnica que además de lograr la absolución de lxs referentes acusadxs, desplegó una disputa jurídico-política en base a la socialización del conflicto, logrando el apoyo de diversos sectores sociales y políticos.

Bloqueo y control territorial ante la militarización

La militarización de los territorios generalmente es protagonizada por fuerzas represivas, sin embargo, también puede estar a cargo de patotas de las empresas o, incluso, de las burocracias sindicales. Lo cierto es que, ante la amenaza de perder el control territorial, quienes luchan despliegan estrategias de bloqueo y recuperación territorial. En la experiencia de la toma de tierras del B° Obrero, en varias oportunidades se cerró el barrio a través de la organización de piquetes en los que lxs vecinxs rotaban en diferentes turnos para mantener bajo su control el perímetro del barrio impidiendo el ingreso de la policía.

Recuerdo que con una sentencia de desalojo se hicieron piquetes en el área de Circunvalación y me acuerdo que hubo un acampe nocturno bastante continuado y que también hubo una movilización muy grande del barrio hacia el centro de la ciudad... me acuerdo de haber estado ahí y que me haya impactado la cantidad de gente que se movilizó... (Activista antirrepresiva, 2/07/2019)

Asimismo, el 28 de agosto de 2013, durante la firma del acuerdo YPF-CHEVRON la legislatura de la provincia de Neuquén y sus inmediaciones devinieron en un territorio en disputa. La noche anterior, diversas organizaciones sociales y políticas, así como



sectores gremiales y estudiantiles, acamparon para impedir el ingreso de los legisladores y, por lo tanto, la aprobación del acuerdo. A través de distintas entrevistas, del Diario de sesiones de la Legislatura de Neuquén y de la experiencia vivencial, reconstruimos ese momento como un episodio represivo en el que el Estado acorazó de coerción la falta de consenso y, por lo tanto, de legitimidad de aquel acuerdo con cláusulas secretas, que no solamente inauguraba la explotación contaminante de los territorios vinculados a Vaca Muerta, sino que también profundizaba una política represiva abierta hacia quienes se atrevieran a resistir la ofensiva del capital.

(...) había una decisión política del gobierno de Neuquén de aprobar a lo que fuera este pacto y estaba medido que iba a haber resistencia popular por eso se militarizó toda la legislatura ¿no? Creo que el gobierno también fue sorprendido por la masividad de la protesta, yo te cuento porque estaba ahí adelante, cuando estábamos delante de la policía (...) veíamos que no había intención de los legisladores de reflexionar sobre el tema porque cuando nos dimos cuenta los legisladores habían entrado por otro ingreso, cuando nos dimos cuenta de que estaban todos listos para sesionar fue donde se desbordó la barrera ... se ve que los perros no estaban adiestrados para semejante muchedumbre... ahí se dieron cuenta y tuvieron que meterse con perro y todo, y empezaron a disparar... La reflexión que les generó a ellos fue que no hay que legislar contra el pueblo, la lección que les dejó a ellos es que el paredón tiene que ser más alto para evitar de que ingrese, y ponerle canales, y faltaban los cocodrilos nomás ¿viste? (Referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, 26/08/2019)

La planificación inicial del operativo represivo se vio absolutamente desbordada. Como planteamos en otro trabajo⁵, tal vez los rasgos de este episodio represivo sean manifestaciones de una política represiva en términos de proceso de ensayo y error y podamos interpretar que la firma del acuerdo YPF-Chevron a fuerza de vallas y balas operó como condición de posibilidad para que luego el macrismo redoblara la apuesta represiva en situaciones de protesta masiva.

Lo dijimos cuando entró por primera vez el Proyecto, esto ya entró torcido, entra a como dé lugar y entra con balazos, con gases lacrimógenos y hasta, bueno, lo de hoy. Volvimos a la época del sobichismo, volvimos a la época de los 90, donde tenemos heridos con balas de plomo en las movilizaciones. La misma Policía que asesinó a Carlos Fuentealba, la misma Policía asesina de Teresa Rodríguez, la misma Policía que le metió sesenta y cuatro perdigones de bala de goma a un compañero de Zanon, como es Pepe Alveal, esa misma Policía es la que nos estuvo disparando hoy durante todo el día, durante todo el día y es la misma Policía que tenemos hoy en esta Casa, que la repudien



y la quiero afuera, no tiene nada que hacer acá en este lugar” (Diputado Raúl Godoy por el FIT, Diario de sesión, 28/08/2013).

Desde julio de 2013 el acuerdo YPF-Chevron ya estaba definido a nivel del Estado nacional en manos del kirchnerismo, y en esta instancia requería la aprobación de la Legislatura provincial para garantizar la seguridad jurídica de los inversores. Por eso, se asumió el costo político de desplegar el operativo represivo, e incluso de recrudescerlo con el correr de las horas, en manos de esa misma policía neuquina capaz de cargar con municiones de plomo sus armas anti-tumultos y una vez más disparar contra estudiantes, docentes y trabajadores.

(...) cruzo la calle para saludar a un par de gente, y vuela ahí en el medio de la gente, vuela un gas lacrimógeno, así que te imaginas... entonces yo cuando les digo a dos amigos míos, vamos a ir a donde están los mapuches, que parece que estamos más resguardados, subimos a la lomita, y ahí fue donde estábamos...me acuerdo que yo estaba con el termo y de repente sentí un golpe y digo uh estos me tienen..., una sensación rara, me quedé como un poco sin aire y cuando veo así sangre digo uh una bala de goma... siento sabor a sangre, entonces digo, mmm es medio raro, y ahí me llevaron a la guardia, cuando me acuesto como que me quede sin oxígeno, ...y ahí es cuando vos ves el techo que se mueve, y pasa y vos ves todo, y la parte más jodida es cuando te hacen ese neumotórax, te tienen que perforar las costillas para liberar el pulmón, y ponerte la sonda, y eso no lo pueden hacer con anestesia, entonces es como que te están carneando y tenés muchas terminales nerviosas, consciente tiene que ser, porque vos tenés que como toser o algo así para que no se colapse el pulmón... (Docente herido en represión Acuerdo YPF-Chevron, 27/08/2019)

La represión duró aproximadamente 8 horas y el punto de inflexión de la jornada fue que hirieran a un docente en el marco de una protesta social. Sin embargo, los relatos plantean que había más heridos y que la represión solo cesó cuando se logró aprobar el acuerdo. Un acuerdo que aún sigue vigente, como la bala de plomo alojada en el pulmón del docente.

Reflexiones finales

*Ya que la dialéctica de la emancipación no es un río largo y tranquilo:
las aspiraciones y las expectativas populares son diversas y contradictorias, a menudo divididas entre la exigencia de libertad y la demanda de seguridad.*

*La función específica de la política consiste precisamente en articularlas y conjugarlas
(...)*



La política surge y se inventa dentro de lo social, en las resistencias a la opresión, en el enunciado de nuevos derechos que transforman a las víctimas en sujetos activos.

(Bensaïd, 2004, p.39-40)

A lo largo de nuestro trabajo hemos esbozado ciertas articulaciones teórico-empíricas que por razones de extensión no repetiremos, pero sí nos interesa reforzar sintéticamente ciertos sentidos de nuestra investigación. Que las luchas territoriales aparecen fragmentadas, esporádicas, espasmódicas y disgregadas, pero existen puntos innegables de encuentro y potencial articulación política. Que la criminalización es uno de los procesos a través de los que el Estado como forma de dominación política interviene en los conflictos para cortocircuitarlos e impedir su articulación. Que las resistencias oscilan entre la subordinación y la insubordinación y se encarnan en procesos de politización subjetiva. Que las luchas territoriales revelan formas antagonistas de resistir ante la ofensiva del capital, de ellas se desprenden experiencias que asumen condiciones objetivas de explotación y opresión, y al mismo tiempo, despliegan prácticas y saberes vinculadas embrionariamente a la autonomía y la emancipación.

Notas

¹ Proyecto de investigación: “Luchas territoriales y forma estatal en la posconvertibilidad (2002-2015): extractivismo, criminalización/compensación y resistencias sociales en experiencias concretas de Río Negro y Neuquén” Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNCo, (Código 04/D104, Ordenanza N° 589/16) 2016-2019; y proceso de elaboración de tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA: “Luchas territoriales y Estado en el norte de la Patagonia argentina: criminalización y resistencia en conflictos por tomas de tierras, derechos indígenas y defensa socio-ambiental en la última etapa del kirchnerismo (2009-2015).”

² Ver Informe sobre Criminalización de la Protesta (Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia) 2012.

³ Los fragmentos seleccionados de lxs entrevistadxs son referenciados identificando sus papeles en las luchas junto a la fecha de realización de cada entrevista, preservando su identidad como máxima metodológica en este tipo de investigación.

³ Ver Giaretto, M., Zapata, Y. y Naffa V. (2018) “Problemas, discusiones y aportes en torno a las luchas territoriales.” En Giaretto, M. (Comp.) *Luchas territoriales y Estado. Criminalización y resistencias en el sur*. Ed Publifadecs, Fiske Menuco (Gral. Roca); y



Giaretto, M. (2018) "Luchas territoriales y Estado: aportes teórico-políticos para el análisis de experiencias en América Latina." En Ouviaña H. y Thwaites Rey M. (Comp.) *Estados en disputa. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina*. Ed. El Colectivo/ IEALC/CLACSO, Bs. As.

⁴ Ver Giaretto, M. (2019) "Política represiva y criminalización de luchas territoriales en el norte de la Patagonia." (En etapa de corrección).

Referencias bibliográficas

Baratta, A. (2004) *Criminología crítica y crítica del derecho penal: introducción a la sociología jurídico pena*. Buenos Aires: Siglo XXI Ed.

Bensaïd, D. (2004) *Teoremas de la resistencia a los tiempos que corren*. Vientos del Sur.

Benjamin, W., 2001 (1921) *Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV*. España: Ed. Taurus.

Blanke, B., Jürgens, U. y Kastendiek H. (2017) "Acerca de la reciente discusión marxista sobre el análisis de la forma y función del Estado burgués. Reflexiones sobre la relación entre política y economía" en Bonnet, A. y Piva, A. (eds.) *Estado y capital. El debate alemán de la derivación del Estado*. Bs. As.: Herramienta.

Calello, H. y Neuhaus, S. (2000) *Método y Anti-método, diseño y proceso de la investigación en ciencias humanas*, Bs. As.: Ed. Colihue.

Daroqui et al., (2012) *Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil*, Rosario: Homo Sapiens.

Foucault, Michel 1989 (1975) *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Hirsch J. (2017). "El aparato de estado y la reproducción social: elementos de una teoría del estado burgués" En Bonnet, A. y Piva A. (ed. y comp.) *Estado y capital. El debate alemán sobre la derivación del Estado*. Argentina: Ed. Herramienta.

Jessop B. (1980). "Teorías recientes sobre el estado capitalista", en *Críticas de la economía política 16/17*, México: El Caballito.

Korol, C., (2009) "Criminalización de los movimientos sociales de la Argentina. Informe general." En Korol, C. (Coord.) *Criminalización de la pobreza y la protesta social*. Bs. As.: Ed. El Colectivo y América Libre.

Modonesi, M. (2006) "Resistencia: subalternidad y antagonismo", para *Rebelión*: <file:///C:/Mis%20documentos/PICT/Bibliografía/modonessi.resistencia%20marcado.pdf>
----- (2016) *El principio antagonista. Marxismo y acción política*. México: Ed. Itaca.



----- (2018) “Consideraciones sobre el concepto gramsciano de clases subalternas.” Consultado en: <https://bit.ly/3bnP2Rt>

Modonesi, M. e Iglesias, M. (2015) “Perspectivas teóricas para el estudio de los movimientos socio-políticos en América Latina.” En *De Raíz Diversa*, Vol. 3, n° 5, enero-junio.

Pérez Roig, D. (2014) “Fracturando Argentina. Promoción y resistencias al avance de los “hidrocarburos no convencionales”. En Composto y Navarro (comp). *Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina*. México: Bajo Tierra Ediciones.

Sautu, R., Boniolo, P. Et. al. (2005) *Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. Bs. As. CLACSO.

Fuentes primarias

Entrevista a Abogado de la Comunidad Winkul Newen 9/5/2018

Entrevista a Docente herido en represión Acuerdo YPF-Chevron, 27/08/2019.

Entrevista a Referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, 26/08/2019.

Entrevista a Activista antirrepresiva, 2/07/2019.

Fuentes secundarias

Diario de sesiones, XLII Período Legislativo, 17a. Sesión Ordinaria Reunión N° 19, 28 de agosto de 2013.



Movimientos socioterritoriales y Estado: La autonomía y la cooptación desde una perspectiva espacial.

Fernanda Valeria Torres¹

Resumen

Ha habido en América Latina, desde fines de los 80, un giro territorial en diversas luchas de base, con la proliferación de movimientos socioterritoriales (MSt) para quienes la apropiación política del espacio es su estrategia central (Fernandes, 2005). Por otro lado, desde principios del milenio, ha habido un reescalamiento de muchas luchas en, desde y por el estado que abrió un ciclo de gobiernos progresistas o de izquierda. Cuando este ciclo progresista parece estar en retroceso, este trabajo examina la relación entre estos dos fenómenos.

Por un lado, la creciente literatura sobre el giro a la izquierda de América izquierda ha tendido a marginar la importancia de los movimientos socioterritoriales. Esto tiene la consecuencia de asumir que el territorio, como un proyecto político, es solo el de capturar y administrar el aparato estatal moderno, ignorando así el carácter multiescalar e inherentemente geográfico de las relaciones entre el estado y la sociedad. Por otro lado, la relación entre MSt y el estado sigue siendo conceptualizada, generalmente, reducida a debates sobre autonomía y cooptación.

Este trabajo analiza la Organización Barrial Tupac Amaru, con sede en el noroeste de Argentina, un movimiento socioterritorial urbano que se acercó y eventualmente se declaró parte del movimiento nacional-popular kirchnerista. Se propone un análisis socioterritorial complejo, partiendo de las relaciones ya existentes entre los MSt y el estado y apostando a comprender cómo estas relaciones se constituyen espacialmente (en qué lugares, con cuáles escalas, a través de cuales redes) para lidiar con las múltiples relaciones de poder.

Palabras clave

Movimientos socioterritoriales; Estado; Giro a la izquierda.

Territorio, instituciones y movimientos socioterritoriales

Las instituciones políticas pueden ser entendidas en tanto mediaciones entre la sociedad civil y el régimen político, de tal modo que puedan ser redefinidas las formas de participación y los dispositivos de legitimación que conforman una comunidad política (O'Donnell, 1997). Al ampliar la perspectiva de análisis, la institucionalización no queda



reducida al espacio de lo estatal, sino que es posible pensarla como estabilización o como establecimiento de ciertas regularidades, pautas comunes en escenarios propios de la sociedad civil, que se hallan politizados. Los movimientos sociales, de acuerdo con Tapia (2008), no tienen un lugar específico donde hacer política, por ello pueden transitar la sociedad civil e incluso el estado politizando los espacios sociales.

Institución

¿Por qué es importante incorporar el eje de las instituciones para comprender a los movimientos sociales? Porque detrás de esta incorporación puede ser revisada críticamente la división entre lo social y lo político, que alude a su vez a la diferencia entre estado y sociedad. No para desconocer sus particularidades, pero sí para postular la articulación dialéctica entre ambos espacios que habilita a comprender los momentos de conflicto y antagonismo, pero también los de consenso y acuerdos que promueven la instauración de instituciones.

O'Donnell define a la institución como la “pauta regularizada de interacción conocida, practicada y aceptada (si bien no necesariamente aprobada) por actores cuya expectativa es seguir actuando de acuerdo con las reglas sancionadas y sostenidas por ellas” (1996: 224). Debido a ello, las instituciones configuran un proceso de generación y cristalización de pautas; son naturalizadas por los sujetos, quienes no cuestionan su existencia ni continuidad, pudiendo llegar a constituir complejas organizaciones.

Sin embargo, en ocasiones las pautas institucionalizadas lo hacen de manera “informal”: el autor refiere a las democracias “institucionalizadas informalmente” (O'Donnell, 1997: 307), aludiendo a ciertas prácticas fuertemente arraigadas en las experiencias políticas de varios de los países de Latinoamérica, que pueden entenderse como instituciones no formales (aludiendo con el término formal al complejo institucional poliárquico). Esta misma idea es la que propongo retomar para analizar las formas institucionales que adoptan, construyen o reconfiguran los movimientos sociales en otra escala, en ciertos territorios.

En este sentido, es posible considerar que los sujetos pretenden, a veces, transformar las pautas de acción que orientan el abordaje de las problemáticas sociales específicas en el contexto territorial en el cual habitan, militan y/o trabajan, creando alternativas institucionales que amplíen el espectro de la participación democrática. Acuerdo, entonces, con quienes sostienen que las organizaciones sociales son espacios de participación política, que no sólo cuestionan el orden social vigente, sino que también tienen posibilidades propositivas que pueden materializarse en la producción de nuevas



instituciones, habilitando la creación de pautas de acción que permitan el trastocamiento de las vigentes (Natalucci y Pagliorone, 2013: 80). Por supuesto que estas potencialidades tienen también sus riesgos. Un autor que supo graficar claramente las diferentes opciones que pueden derivar del encuentro de los movimientos sociales y la arena política institucional es Gerardo Munck (1994), quien ensaya dos escenarios posibles cuando los movimientos abandonan los escenarios propios de la sociedad civil y pasan a protagonizar acciones en la política institucional, de acuerdo con la preeminencia de la estrategia o de la identidad: la conocida salida de la cooptación (cuando la estrategia supera la preservación de la identidad) o una fuerza social comunal/fundamentalista (cuando se deja de lado la estrategia en pos de conservar la identidad).

El peligro de la cooptación asociado a la pérdida de autonomía por parte de los movimientos sociales que derivan en y del debilitamiento de los rasgos identitarios de los mismos es, sin duda, el riesgo subrayado y compartido por un amplio conjunto de análisis y perspectivas en los estudios sobre el rol político de los movimientos sociales. La apuesta de este trabajo es analizar ciertos procesos de institucionalización en tanto formas de articulación política que derivan en la producción y apropiación de territorios por parte de los movimientos sociales, y que esta situación no siempre ni de manera inevitable deriva en escenarios de cooptación y heteronomía, entre otras razones porque, volviendo a Tapia, la distinción entre sociedad civil y política no es tan clara en determinadas relaciones de solidaridad y de conflicto. Pero también, porque los territorios constituidos por ciertos movimientos sociales configuran espacios multidimensionales y sobrepuestos con el propio estado.

Territorio y Movimientos socioterritoriales

Analizando el recorrido protagonizado por ciertos movimientos sociales pueden ser identificadas ciertas prácticas y sentidos que han ido cobrando un profundo carácter institucional (como ya fue señalado, para O'Donnell podrían categorizarse como instituciones informales, pero no es una idea fuerza que incorpore al análisis, por la carga denigratoria de dicho adjetivo): la movilización social y los procesos de territorialización se cuentan entre ellos. De estos dos procesos, me ocuparé en este trabajo del segundo, al analizar los movimientos que se definen como socioterritoriales: movimientos sociales que transforman el espacio en territorio a través de la conflictualidad entre las fuerzas políticas que intentan crear, conquistar y controlar sus territorios. Y lo haré en base a un esquema de análisis basado en cuatro ejes: control y



apropiación del espacio como estrategia; identidades y demandas vinculadas al territorio; visibilización y politización de la reproducción social e institucionalización socioterritorial, siendo este último el central (Halvorsen, Fernandes y Torres, 2019). Los movimientos socioterritoriales tienden a construir instituciones en y a través del territorio, proveyendo herramientas a través de las cuales resolver sus objetivos. El interrogante por la institucionalización supone atender a los efectos de un ciclo de movilización sobre el funcionamiento del régimen político en el que se da dicha movilización y, en particular, me interesa revisar la dimensión territorial de dicha interacción.

¿Qué implica el proceso de institucionalización y/o de desinstitucionalización de un movimiento social? La institucionalización, corriéndose del eje de la cooptación y de la idea asociada a la formalidad puede pensarse como la construcción de un territorio y me abocare a algunos movimientos socioterritoriales urbanos que disputan la ciudad a partir de producciones de hábitat urbano que no se condicen con los procesos de urbanización propios del capital y sus agentes inmobiliarios hegemónicos.

Este tipo de esquema puede observarse en la provincia de Chaco con el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Emerenciano, en la provincia de Buenos Aires con el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), en CABA y en diferentes provincias del país con el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y con la Organización Barrial Tupac Amaru (OBTA).

El caso de la OBTA: ¿Un movimiento socioterritorial urbano “integrado”?

A comienzos del S XXI los movimientos sociales urbanos, ligados a problemáticas de empleo y pobreza, cobraron una centralidad inédita en Argentina. Los llamados movimientos piqueteros, movimientos de fábricas recuperadas y asambleas ciudadanas se multiplicaban a la largo y ancho del país.

En la nortea provincia de Jujuy, parte de una región que históricamente padeció un precario desarrollo económico y altísimos índices de pobreza, nació en 1999 la Organización Barrial Tupac Amaru (OBTA), (Battezzati, 2014; Manzano, 2015; Gaona, 2016).

La OBTA se conforma, tal como su nombre lo indica, como organización barrial para responder colectivamente a diversas demandas básicas de un amplio sector de la población jujeña más desprotegida: en un primer momento se ocupó de petitionar por bolsones de comida y organizar copas de leche en los barrios periféricos de la ciudad capital de la provincia, San Salvador de Jujuy. Luego, comenzó a delinear estrategias



para resolver el problema generalizado de acceso a empleo, en un contexto de elevada desocupación, heredero de las medidas neoliberales implementadas en todo el país desde mediados de la década del setenta y con intensidad inusitada durante la década del noventa.

En diciembre de 2001 se produce la crisis conocida como el “argentinazo” y el posterior cambio de gobierno en 2003, con el triunfo de Néstor Kirchner como presidente de la República. El nuevo gobierno inaugura o revitaliza diferentes líneas de financiamiento en políticas públicas para paliar la trágica situación social, junto con un reposicionamiento político e ideológico que tiende a acercar posiciones, crear alianzas o coordinar con algunas de las muchas organizaciones sociales protagonistas del período (Boyanovsky Bazán, 2010). La OBTA se cuenta entre ellas y pronto pasa a conformar una alianza bastante sólida con el gobierno nacional: se adapta al modelo cooperativo y comienza a recibir financiamiento para la construcción de viviendas sociales, bajo el Programa de Emergencia Habitacional (PEH).

El exitoso desempeño de la organización para construir viviendas en un plazo y costo menor al esperado y exigido, se traduce en un crecimiento exponencial y sostenido de la OBTA en los siguientes 12 años. La organización logra una disciplina de trabajo y crecimiento impactantes que se traduce en la construcción de territorios propios: barrios de vivienda con escuelas, centros de salud, fábricas, polideportivos, parques acuáticos y temáticos, cines, centros culturales, radios populares, etc. En el análisis realizado aquí, se trata de *instituciones*, de las cuáles se derivan miles de puestos de trabajo y servicios esenciales que, a su vez, se inscriben en un “dispositivo de bienestar social” (Manzano, 2015: 26), dispositivo que tiene un fundamento territorial.

El ejemplo más paradigmático de este proceso es el Barrio de la Tupac en Alto Comedero, en S. S. de Jujuy, donde la organización alcanza a construir 3000 viviendas. Es un claro proceso de territorialización mediante el cual la organización se apropia de un territorio urbano, determina su uso, sus reglas, sus posibilidades: para qué usar cada porción de suelo (para construir una vivienda, un centro de salud, una cancha de fútbol, una pileta, etc.), por qué (atender demandas de los y las jóvenes, de los y las trabajadoras o de la organización) y de qué manera (mediante determinadas jornadas de trabajo, rotando las tareas. Y, en ese proceso, el movimiento construye identidad, poder y estrategia política a partir de su propio territorio.

Su principal *estrategia* de visibilización y crecimiento se concibe a partir del territorio construido para que los miembros de la Tupac puedan vivir y cubrir sus necesidades.



En y desde este nuevo territorio, reproducen modos de convivir, distribuir y pautar los intercambios ya sea en el campo de la educación, del trabajo, de la salud, de la cultura. Y, desde allí, se extiende a una estrategia territorial de sobrevivencia, basada en la atención de demandas y en la instrumentación local de políticas públicas diseñadas y financiadas desde el gobierno nacional. Son dos los programas fundamentales que posibilitaron la estructuración de esta estrategia: el Programa Federal de Emergencia Habitacional (PEH) y el Plan RemediAR, programa creado en el 2002, en el marco de decretar la Emergencia sanitaria luego de la gran crisis del 2001 en el país. El PEH busca, mediante el financiamiento de la construcción de viviendas a través de cooperativas de trabajo, paliar los grandes déficits habitacionales a la vez que impulsar fuentes de trabajo y el RemediAR se propone cubrir la provisión de medicamentos esenciales ambulatorios a personas sin cobertura de salud y bajo la línea de pobreza. En el 2004, la OBTA se adaptó al modelo cooperativo para poder cumplir con el PEH y este momento supuso una profunda transformación organizativa, un salto de escala de acción de la organización y de crecimiento en términos de miembros, recursos y obras realizadas por la Tupac. A su vez, implicó una fuerte alianza política con el gobierno nacional kirchnerista que, como veremos luego, trajo consecuencias en términos de dependencia y de tensiones políticas a nivel provincial y local.

En todos los espacios de la organización los *cómo* y los *cuándo* de las actividades y sus reglas se construyen colectivamente y con pautas propias: todos los miembros de la Tupac participan de alguna copa de leche al afiliarse a la organización con la que tienen que colaborar sea con trabajo voluntario o cualquier otro tipo de ayuda; todos los niños y niñas acceden a la escuela, la secundaria y el terciario de manera gratuita y con trayectorias flexibles; todos los que necesiten asistencia médica pueden obtenerla de manera gratuita en los centros de atención de la organización. Los problemas, los conflictos y tensiones entre vecinos de los barrios de la Tupac o entre trabajadores de una misma cooperativa se resuelven en asamblea, incorporando en la discusión al presidente de la cooperativa o, incluso, a la máxima referente de la organización, Milagro Sala.

La impronta de la OBTA se materializa en la manera como construyeron sus barrios y en la manera como han disputado el uso del suelo urbano: dejando de lado la especulación inmobiliaria y el individualismo propio del esquema meritocrático liberal que sujeta las posibilidades de acceso a la ciudad a la capacidad de compra de las personas en el mercado. También ha facilitado reposicionamientos simbólicos, étnicos



y clasistas al posibilitar que los *indios* y los pobres de Jujuy accedan simbólicamente y materialmente al uso del centro de la ciudad, al construir su Sede en una de las calles mejor ubicadas de San Salvador.

En segundo lugar, la *identidad* de la organización se amalgama en esta concepción territorial: son *tupaqueros* porque comparten un espacio propio simbólico y material: comparten una forma de concepción del trabajo, de la militancia, de la convivencia barrial, del modelo de ciudad. Comenzaron a construir otra subjetividad, anclada en la cultura del trabajo colectivo, la responsabilidad y la solidaridad. También nutrida de una fuerte disciplina y bajo una organización donde, si bien las principales decisiones y líneas de acción se definen en asambleas, estas funcionan en la práctica como escenarios donde la voz primordial es la de las personas con fuertes liderazgos.

Estas nuevas subjetividades insurgentes y transformadoras se encuentran claramente asociadas a una forma de liderazgo territorialmente situado: Milagro Sala: una mujer jujeña, pobre, *inda*, *negra* que pudo, desde su trayectoria individual, construir una identidad colectiva a su imagen, anclada fuertemente en su tierra. Quizás este es uno de los elementos que permitan explicar la trabajosa replicabilidad de la experiencia de Jujuy en otras provincias del país.

La identidad tupaquera combina de manera singular la pobreza, la "indianidad" y el género. Sin dudas, es una organización que organiza a los sectores más vulnerados y vulnerables de la sociedad jujeña, pero además lo hace recuperando la reivindicación de dos clivajes que articulan la discriminación y la subordinación en una provincia machista, tradicional y elitista. Por una parte, se incorpora en la Tupac "lo indígena", utilizando elementos y recursos simbólicos de los diferentes pueblos que nutren la historia de una población que posee el mayor índice de descendientes de indígenas de Argentina. No distinguen entre los pueblos aymara, quechua o guaraní, sino que se reivindica el legado indígena, sintetizado en la bandera wipala que utilizan en todos sus eventos, movilizaciones y sedes. Por la otra, la mujer es sujeto de empoderamiento; desde el lugar de liderazgo de Milagro Sala, pero también desde la reconfiguración de roles laborales y dirigenciales, tradicionalmente asociados a la masculinidad: mujeres jefas, mujeres albañiles, mujeres organizadas y organizadoras, mujeres indias dando órdenes y siendo respetadas. Y no sólo la mujer, sino la diversidad de identidades de género es aceptada, visibilizada e integrada en la organización, quien construyó un Espacio de identidad de género para permitir la expresión, contención y acción política a homosexuales, bisexuales, transexuales, etc. Considero que estos elementos pueden



entenderse también desde una clave territorial: el barrio propio, el territorio apropiado a través de la construcción barrial es el espacio donde estas reivindicaciones y empoderamientos son factibles de ser construidos, resguardados y profundizados.

En tercer lugar, derivado (y reforzando) lo anterior el territorio en la OBTA puede concebirse como el dispositivo de producción y reproducción de procesos de *socialización política*. Los hombres y mujeres, adultos y jóvenes que se han incorporado a la Tupac no sólo han encontrado la resolución de muchas de sus demandas (de vivienda, de salud, educativas, laborales, culturales) sino que han sabido construir desde la convivencia colectiva valores, afectos, códigos comunes de comprensión del mundo, de tramitación de diferencias y disputas.

Nuevas relaciones sociales, nuevos valores y nuevas mediaciones para concebirse en tanto un nosotros político y potente para la acción colectiva extracotidiana, bajo grandes movilizaciones y eventos públicos. Pero también en eventos y situaciones cotidianas de convivencia y construcción día a día de la organización en sus barrios, en sus copas de leches, en sus fábricas y escuelas.

La socialización política deviene de una socialización territorial novedosa: luego de la implementación de las diversas medidas de reconfiguración neoliberal y sus consecuencias en materia de desindustrialización y precarización laboral, educativa, sanitaria y social, organizaciones como la Tupac iniciaron un proceso de reconstrucción social, simbólica y política que se asentó en la recuperación de espacios propios: desde la vivienda organizada en barrios propios, se puede comprender la construcción de sus fábricas, sus escuelas, sus salitas, sus radios, sus cines, sus templos. Y en cada uno de esos espacios de trabajo, de formación, de recreación, se configuraron subjetividades atravesadas por la activación, el tomar el mando y definir desde las propias experiencias y necesidades, tanto materiales como simbólicas (entre estas últimas el ejemplo más paradigmático es el de la construcción de piletas y parques acuáticos, que respondió a una reivindicación simbólica muy fuerte, atravesada por años de exclusión para los niños y niñas pobres de la posibilidad de acceder a una pileta para refrescarse en los días de intenso calor jujeño).

Frente a un contexto hostil, frente al mercado económico y político dominante que sistemáticamente los invisibiliza como sujetos de derecho, que los denigraba como sujetos laborales y que los silenciaba como sujetos políticos, la posibilidad de la construcción política abierta desde la propia agencia, puede ser considerada el primer gran paso para una nueva subjetividad insurgente y socialización política



transformadora en un territorio redefinido y construido en disputa con esos otros territorios de la política, de la economía y de la sociedad jujeña capitalista, *blanca* y urbana.

En cuarto y último lugar, referenciamos el proceso de *institucionalización* formal que protagonizó la OBTA a partir del 2013 con la creación de un partido político como herramienta electoral, el Frente Unidos y Organizados (FUyO). Este último eje puede ser considerado central, puesto que propone el tránsito del territorio político propio, producido, apropiado y controlado al territorio político de las instituciones dominantes en el régimen político poliárquico. Del territorio de las movilizaciones, del poder popular, de la ocupación de las calles y plazas, de la construcción de barrios, de escuelas y de fábricas con reglas de funcionamiento y pautas de intercambio construidos desde la propia organización, al espacio de la representación electoralista, con su lógica y reglas propias. En otro trabajo se analiza el desempeño electoral del FUyO en las contiendas electorales de 2013 y 2015 (Torres, 2016 y 2019), lo que interesa resaltar aquí es que la base de legitimación y acumulación política que se expresó en el FUyO, provino del desarrollo de la militancia territorial de la Tupac y que este proceso de institucionalización formal dependía por completo del “éxito” del territorio propio. Cuando este último comenzó a ser cuestionado y erosionado, sucedió lo mismo con la institución partidaria.

La puesta en cuestión del proceso de territorialización se origina en un proceso de desinstitucionalización que podemos reconstruir a partir de revisar el proceso de implementación de políticas públicas ya reseñado, ahora en clave de institucionalización. Esta implementación fue realizada con grandes márgenes de maniobra por parte de la organización, no obstante lo cual, devino en relaciones de dependencia financiera y política con los gobiernos nacionales del kirchnerismo (2003-2015), etapa que marca los rasgos, el crecimiento y la consolidación de la organización. Esto se comprueba de manera contrafáctica, al cambiar el signo de gobierno en el país y en la provincia de Jujuy en 2015 e iniciarse una etapa de fuerte desterritorialización de la OBTA por parte del gobierno del radical Gerardo Morales en la provincia. Lo/las máximos/as referentes y dirigentes de la OBTA, casi todas mujeres, con Milagro Sala a la cabeza, fueron encarceladas bajo denuncias de malversación de fondos y corrupción, en procesos judiciales con muchas irregularidades.

Las instituciones construidas por la organización fueron progresivamente desmanteladas: le quitaron la personería jurídica, sus escuelas, sedes y fábricas fueron



confiscadas por el nuevo gobierno, entre otras medidas y decisiones tendientes al desmantelamiento de la organización. La estrategia, identidad y sociabilidad de la organización atraviesa en la actualidad momentos de mucha fragilidad.

Podemos tratar de explicarnos este proceso señalando la modalidad asumida por la institucionalización de la OBTA, en clara dependencia de un Proyecto político que alimentó y ayudó a construir, perdiendo de ese modo autonomía respecto a los resortes y recursos del Estado en términos financieros y respecto al amparo político del gobierno nacional, en términos de legitimidad y poder.

Esta última cuestión es central para poder sopesar la potencialidad (y en ocasiones, inevitabilidad) de la institucionalización de prácticas, modalidades y territorialidades de los movimientos sociales. ¿No es el territorio construido por estos movimientos una forma institucional (quizás no formal) que provee durabilidad y solidez a construcciones colectivas transformadoras? Esa forma institucional territorializada no deja, evidentemente, de tener un signo político definitorio en términos de relaciones de poder que lo vuelven entonces, contingente y cambiante.

Notas

¹ IdIHCS-UNLP/CONICET

Bibliografía

Battezzati, S. (2014). La Tupac Amaru: movilización, organización interna y alianza con el kirchnerismo (2003-2011). *Población & Sociedad* [en línea], Vol. 21, Nº 1, 5-32. http://www.poblacionysociedad.org.ar/include/ABS/abs_v21_Battezzati.php

(consulta 30 de julio de 2016)

Boyanovsky Bazán, C. (2010). El Aluvión del piquete al gobierno. *Movimientos Sociales y Kirchnerismo*. Buenos Aires: Sudamericana.

Fernandes Mançano, Bernardo (2005) "Movimientos socio-territoriales y movimientos socio-espaciales" en OSAL, Buenos Aires: CLACSO, Nº16: 273-283.

Gaona, Marina, 2016. Experiencia, ciudad e identidad en torno a la organización barrial Tupac Amaru de San Salvador de Jujuy. Tesis Doctoral, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52003> (Consultado 10/04/2018)

Halvorsen, Sam, Mançano Fernandes, Bernardo y Torres, Fernanda. (2019) "Mobilizing Territory: Socio-territorial Movements in Comparative Perspective" *Annals of the American Association of Geographers*. <https://doi.org/10.1080/24694452.2018.1549973>



Manzano, Virginia (2015) 'Lugar, trabajo y bienestar: la organización barrial Tupac Amaru en clave de política relacional', Publicar, Año XVIII N° XIX: 9-35.

Munck, Gerardo (1995) "Algunos problemas conceptuales en el estudio de los movimientos sociales", en Revista Mexicana de Sociología, N° 3.

Natalucci, Ana (2011) "Entre la movilización y la institucionalización. Los dilemas de los movimientos sociales (Argentina, 2001-2010)" en Polis [En línea], 28.

O'Donnell, Guillermo (1997) "Otra institucionalización" en O'Donnell, G. Contrapuntos. Buenos Aires: Paidós.

Organización Barrial Tupac Amaru (OBTA). 2014. Anuario "Nuestros 15 años". Jujuy: OBTA

Tapia, Luis (2008) "Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política" en Tapia, L. Política Salvaje, La Paz: CLACSO, Muela del Diablo Editores y Comuna.

Torres, Fernanda Valeria (2019) "Proceso de territorialización de la Organización Barrial Tupac Amaru: cooperativas, barrio y política" en Estudios socioterritoriales, N° 25 enero-junio 2019, e023. Disponible en <http://revistaest.wix.com/revistaestcig>



¿Y qué pasó con el movimiento estudiantil?

Discursos de dirigentes estudiantiles sobre el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Simón Bautista Mendoza Aravena

Resumen

El objetivo de nuestra investigación es conocer los discursos de las y los dirigentes estudiantiles chilenos sobre el estado del conflicto educacional y del movimiento estudiantil frente al primer año de gobierno de la segunda administración Sebastián Piñera. Para ello, se hizo revisión de la importancia del movimiento estudiantil del año 2011 en Chile y su impacto en las relaciones entre Estado y sociedad. Luego se visitaron las reformas y el balance que las y los estudiantes han realizado sobre las políticas implementadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Posteriormente, se profundizó en las transformaciones asociadas al surgimiento masivo de manifestaciones feministas al interior de las casas de estudios durante el año 2018. Ello a través de entrevistas semiestructuradas. Dentro de los resultados más destacables se encuentra una doble paradoja: por un lado, se considera que la agenda de “reformas estructurales en educación” tuvo un impacto significativo en el debilitamiento del movimiento estudiantil, pero que, por las propias deficiencias de las iniciativas empujadas, existe posibilidad de reabrir un debate futuro sobre educación. Por otra parte, la emergencia de las movilizaciones feministas aparece como uno de los fenómenos más relevantes para reactivar los procesos de acción colectiva dentro de los espacios universitarios y para reposicionar la necesidad de cuestionar la distancia entre política y sociedad en Chile, sin embargo, su importancia también pareciese asociada al cuestionamiento de las estructuras organizacionales hasta allí sostenidas, así como un desafío de nuevos discursos y organizaciones en el campo estudiantil.

Palabra clave

Movimiento estudiantil; Estado y sociedad; Política y sociedad; Movimientos sociales; Sociedad civil.

Introducción

El siguiente documento tiene como objetivo profundizar sobre el estado actual del movimiento estudiantil chileno, en especial, tomando en consideración su impacto en la sociedad chilena y en el debate educativo, así como también en la influencia que ejerció



en otras luchas sociales que se han desarrollado en el país. Para ello se hará una primera revisión de la noción de movimiento social y la perspectiva que utilizaremos para medir su impacto en la sociedad chilena, después, daremos cuenta brevemente de la realidad del movimiento estudiantil del año 2006 y 2011, y su influencia en la sociedad chilena. Posteriormente, visitaremos la experiencia de la Nueva Mayoría, en tanto administración que toma las banderas del movimiento estudiantil del año 2011 y la defiende, al menos discursivamente, y busca también su implementación. De su resultado daremos cuenta del contexto socio político reciente, con el cambio de gobierno y el surgimiento del Frente Amplio, entendiendo su relevancia por su vínculo con los movimientos sociales y por su noción de partido movimiento. Luego, haremos revisión del proceso de movilización feminista estudiantil, para dar cuenta finalmente, de la visión del estado del movimiento estudiantil chileno desde la perspectiva de sus propios actores, donde se enfatizan las tensiones y oportunidades que actualmente se proyectan al interior de dicho conflicto social.

Movimiento social e impactos

En referencia los movimientos sociales, Diani (2015) quien ha debatido sistemáticamente sobre los límites entre los diferentes enfoques de los movimientos sociales y los puntos de convergencia entre ellos, ha planteado recientemente que desde los debates en esos años, se ha desarrollado un creciente consenso sobre el hecho de que los movimientos sociales no pueden identificarse con ninguna organización específica, sino que, por el contrario, se conciben en mayor medida como sistemas complejos y básicamente inestables de interdependencia entre una multiplicidad de actores, entre los que se incluyen individuos, grupos independientes y organizaciones formales (p.10), siendo claro en comprender que los movimientos sociales no son tampoco grupos ni cuasi grupos, ni un compuesto parecido a un grupo, sino una forma compleja de acción (Tilly, 2015).

Lo interesante de los movimientos sociales es que son, entonces, un tipo de acción colectiva -no la única forma de acción colectiva- que posee una cierta densidad organizacional, una cierta duración en el tiempo y que se plantea la conservación o la transformación de la sociedad en su conjunto, o de un ámbito dentro de ella (Garretón, Cruz, Aguirre, Bro, Farías, Ferreti & Ramos, 2011). Valdría la pena distinguir, a su vez, entre un movimiento social central de una sociedad que define el conflicto o problemática central de ellas apuntando a su superación sobre la base de una nueva sociedad (historicidad) y, por otra, los movimientos sociales particulares que definen una



problemática específica (instrumental o constitutiva de un determinado sujeto (Garretón, 2014, p.214).

Un aspecto importante para tener en consideración sobre este último punto es en torno al impacto. En primer lugar, es necesario reconocer que los movimientos sociales utilizan principalmente repertorios contenciosos principalmente como manera de compensar la debilidad en los recursos y en general su limitado acceso a las instituciones, lo que abre también la duda sobre sus posibilidades de éxito en el sentido del cumplimiento de sus objetivos. Desde esta perspectiva compartimos la idea de la dificultad de una noción clara en torno al impacto y medición de resultados de los movimientos sociales, esto en relación con la complejidad que entraña analizar la influencia que corresponde específicamente al movimiento social y no a otros actores (Aguilar & Romanos, 2017).

Ahora bien, desde nuestra perspectiva, podemos entender los impactos de los movimientos sociales a través de una triple dimensión (Garretón, 2011), esto es, en primer lugar, aquel que tiene al movimiento como su propio referente, es decir, asociado a la constitución de un sujeto. Hay una segunda dimensión, asociado a lo reivindicativo, es decir, sus demandas y lo que logra conseguir, y una tercera dimensión, la política o de historicidad, que apunta a la transformación de la sociedad o a un ámbito de ella, que implica transformaciones de más largo plazo y que incluye evidentemente aspectos de tipo cultural (Garretón, 2011, p.108).

El movimiento estudiantil del 2006 y 2011

Para partir, es necesario tener presente que Chile, desde la década de 1990 en adelante, luego de un proceso de transición democrática que se había caracterizado por una ausencia de movilizaciones sociales de gran alcance, se veía afectada por un prolongado paro estudiantil que combinó nuevos repertorios de acción colectiva, una pluralidad política muy significativa dentro de las vocerías del movimiento (desde grupos anarquistas hasta la derecha política chilena) y con un respaldo inédito en términos de la valoración ciudadana. Ello se combinó con cuestionamientos al funcionamiento de la política en el país y sus políticas sociales, lo que significó un verdadero salto cualitativo en las dinámicas de protesta social del Chile post dictatorial (Ruíz, 2007).

Este fue un proceso de movilización que partió desde la exigencia del pase escolar gratuito (es decir, el no pago por la utilización del transporte público para llegar a sus establecimientos) hasta demandas de tipo estructural asociados a los cambios en la ley orgánica constitucional. La respuesta del sistema político se manifestó de diferentes



maneras, por un lado, con un rechazo a las movilizaciones y a sus propuestas, por otro, con la integración de las demandas. Luego de meses de paralización se utilizó un mecanismo para canalizar institucionalmente dicho malestar expresado en las calles por medio de la creación de un consejo asesor presidencial que, como se verá posteriormente, será una de las lecciones más significativas del movimiento estudiantil chileno, observado como una derrota y cooptación de sus demandas (Urra, 2012).

A su vez también el proceso de movilización cuestionó los diagnósticos asociados a una despolitización de la juventud chilena producto de su creciente tasas de abstención desde los años 90', y pareció más bien demostrar un cambio en el carácter del malestar que se había ido detectando desde los primeros años del Chile post dictatorial (PNUD, 2012). Hay una demostración a su vez de que estos individuos forjados en el páramo del consumo (Moulian, 1997) eran capaces de expresar a través de formas de acción colectiva sus intereses, utilizándola como mecanismo que permite exigir unos derechos les parecían necesarios de ser cumplidos (Ruíz, 2007). Pareciese ser que en estas luchas que subyacen a la refundación capitalista neoliberal irrumpe una resistencia a la mercantilización y privatización de la vida social en defensa de la soberanía sobre la propia vida cotidiana (Ruiz, 2019, p.58).

La mesa de diálogo contó con una participación sumamente numerosa y heterogénea de actores cuyas conclusiones parecieron decantar en simplemente señalar las vastas diferencias existentes en la forma de solucionar el conflicto educacional (Ruíz, 2007), y aunque permite responder frente a las movilizaciones no logra resolver los problemas de fondo que las suscitaron (Garretón et. Al, 2011).

Esta experiencia contaría sobre todo en el año 2011 con un segundo momento en donde se alcanza mayor amplitud y se presenta también ciertas demandas en positivo que estructuran una propuesta de política para resolver los dilemas que enfrenta la sociedad: una educación pública, gratuita y de calidad.

Es posible reconocer, entonces, cuatro ejes estructurantes de su crítica al modelo educativo existente. En primer lugar, un fortalecimiento de la educación pública, lo que se refleja en un trato preferente y en terminar con el trato anodino que tiene el Estado con sus propias instituciones educativas. En segundo lugar, se plantea la necesidad de terminar con el lucro, particularmente cuando se realiza con recursos públicos, sobre todo por sus consecuencias en la discriminación injustificada, la baja calidad del servicio educativo y los crecimientos descontrolados de carreras y títulos universitarios que no tienen cabida en el mercado laboral.



A ello se suma, también, la idea de la gratuidad en la educación, que tiene en materia de educación secundaria la correlación con el fin al copago, y a nivel universitario con el fin al endeudamiento. Finalmente, se plantea la necesidad de terminar con la selección y la disminución de la desigualdad y la segregación social que reproduce y amplía el sistema educativo chileno. Estos cuatro aspectos, evidentemente van a contrapelo de lo sostenido como principios de mercado estructurantes del Estado subsidiario en materia educacional en el país (Atria, 2014).

Las presentes demandas entroncan sumamente bien con la idea de expansión y garantía de derechos propio de las sociedades capitalistas desarrolladas (Marshall, 1998). Lo que ocurre es que por la radicalidad del experimento neoliberal en educación que se implementó en el país, dichas propuestas son estigmatizadas como una visión anti-mercado o de vocación izquierdista (Bellei, 2015).

El segundo gobierno de Michelle Bachelet y las reformas al “modelo”

La respuesta a las modernizaciones neoliberales en materia de educación de parte de los estudiantes permitió poner en la palestra la necesidad de cambios educacionales y lo íntimamente ligado de su funcionamiento con el modelo de desarrollo y el tipo de sociedad que se promovió desde la dictadura militar, también abrió una ventana de oportunidad para precisamente discutir sobre el futuro de la nación (Garretón, 2014).

Tales demandas se transformaron en la base a lo menos discursiva a de lo que sería la reforma educacional anunciada por Michelle Bachelet durante el año 2013 cuando se presenta como candidata a la presidencia por segunda vez en el país y que desde el 2014 se reflejarían al menos parcialmente en distintos proyectos de ley (Garretón, 2017).

Lo anterior explica que las reformas en educación se convirtieron en una de las medidas emblemáticas del gobierno, establecida como el desafío principal que enfrenta el país para combatir las desigualdades existentes y constituirse en una sociedad verdaderamente desarrollada (Bachelet, 2014, p.16). En el programa de gobierno, se establece que mejorar la calidad y fortalecer la educación pública y del rol del Estado, reducir la segregación y contar con un país más integrado, bajo un esquema de gratuidad universal entendida como un derecho social, así como el fin al lucro en todo el sistema educativo, con iniciativas integrales en los diferentes niveles e interrelacionadas entre sí es lo que inspirará la agenda durante su gestión presidencial (Bachelet, 2014, p.15-18).



Ahora bien, desde la perspectiva del movimiento estudiantil chileno múltiples aspectos serán cuestionados sistemáticamente sobre todo por señalar que detrás de dicho discurso, se mantiene una política de promoción de políticas de tipo neoliberal (Senado Universitario, 2015). Esto es comprensible en tanto las movilizaciones del año 2011 y 2012 plantean una ruptura con aquella clásica relación entre lo político institucional y lo social, es decir, un cambio de la naturaleza del vínculo existente hasta entonces (Garretón, 2014, p.239).

Ello se reflejaría en que, por primera vez en la historia nacional, aparece un actor o sujeto que no se identifica con, ni está constituido por, el sistema partidario, y que se ha ido separando de los actores políticos de la transición y postransición (Garretón, 2017, p.215). Dicha separación se profundizaría producto de que las respuestas desde la institucionalidad buscaban soluciones parciales que no daban cuenta de la centralidad de la demanda del movimiento social: la sustitución del modelo educacional. Esta insuficiencia en la respuesta aumenta el distanciamiento y la desconfianza, lo que sumado al éxito de las movilizaciones lleva a su autoafirmación y a encerrarse a sus propias lógicas, negándose con la política mutuamente (Garretón, 2014, p.239).

El sistema político intenta responder ante esta situación a través del modo clásico de constitución de actores, generando programas de gobiernos y ampliando coaliciones, pero la participación electoral se vuelve la más baja de la historia contemporánea en el país (Garretón, 2017, p.217). Esto reflejaría que los movimientos sociales ya no se expresan a través de un sujeto político partidario y social, como lo fueron el Frente Popular, la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, así como la Concertación y el Partido Comunista en los años noventa (Garretón, 2016, p.29).

En ello, vale la pena considerar que el mismo movimiento estudiantil tiene una relación sumamente compleja con dicha coalición, por considerar que las demandas presentadas no representarían un cambio estructural, sino una desfiguración de sus ideas y proyectos. Eso diría relación con que es posible observar una autonomización de la protesta social, donde los partidos políticos no han requerido de los movimientos sociales, y estos últimos tampoco al sistema de partidos (Somma & Bargsted, 2015), de hecho, se utiliza también esa distancia como forma de crecimiento y expansión en las convocatorias estudiantiles (Arellano & Aylwin, 2015).



Las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2017 y emergencia del Frente Amplio

Es indudable que las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018 impactan de manera muy significativa el panorama político y social chileno. Esto, en primer lugar, dice relación con la emergencia y constitución de un nuevo actor político – el Frente Amplio – cuyas principales figuras y dirigentes, así como movimientos y partidos políticos, provienen de la revuelta estudiantil, con un discurso que incorpora de manera relevante las demandas y consignas de los movimientos sociales de los últimos años. A su vez, logra un inesperado e inédito resultado electoral, con una candidatura que proviene por fuera del campo de la política tradicional y que alcanza el 20% de las preferencias en primera vuelta, y que contribuye a que la coalición emergente obtenga 20 diputados y también un senador.

Las razones del éxito de dicha coalición pueden ser múltiples, y probablemente tengan vínculo con la transformación limitada del sistema electoral (desde el sistema electoral binominal a uno proporcional limitado), las propias deficiencias y tensiones del proceso de reformas abiertos por la sociedad y puestos en debate sobre su implementación durante el gobierno de la Nueva Mayoría, la honda deslegitimación de los partidos políticos tradicionales así como la crisis de representación que venía gestándose desde hace décadas (PNUD, 1998; PNUD, 2002; PNUD, 2012) y que vio en esos años una situación crítica por los casos de Penta y SQM en el plano de la política, además del caso Caval, que afectó directamente a la coalición gobernante y a la ex presidenta Michelle Bachelet, pero también con casos de que afectaron a carabineros y el SENAME (Toro & Valenzuela, 2018) entre varias otras más. Aunque importante para comprender las dinámicas actuales del movimiento estudiantil, la emergencia de este nuevo actor evidentemente tiene un impacto, que recién se comienza a percibir, en el campo de las fuerzas de la sociedad civil que abrieron el debate en Chile sobre el tipo de sociedad y su futuro.

En segundo término, en las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2017 se observa una contracción de los resultados de las fuerzas políticas que habían empujado la segunda candidatura de Michelle Bachelet (Santana, Rama, Arellano & Montero, 2018), tanto por el débil resultado electoral obtenido en primera vuelta por Carolina Goic (DC) como por Alejandro Guillier (PC, PS, PRSD, PPD, MAS, IC), ello puede tener directa relación también con una multiplicidad de factores, por ejemplo asociadas al hecho de que apenas un 18% aprobaba la gestión de gobierno en mayo de 2017 (Cruz



& Varetto, 2018) además de presentarse sin un candidato único para enfrentar la primera vuelta electoral.

En tercer lugar, se presenta un resultado favorable para la derecha chilena, con un crecimiento en su peso parlamentario (de 40 a 47%), probablemente vinculado entre otros aspectos al hecho de presentarse como una alternativa razonable a un crecimiento y una economía que se percibía en la sociedad como estancada o deprimida, acusando por parte del ex presidente de que el camino de las reformas promovidas generaba consecuencias negativas para el crecimiento del país (Cruz & Varetto, 2018) además de un resultado muy favorable en segunda vuelta respecto al candidato de la Nueva Mayoría (Toro & Valenzuela, 2018). Todo ello se puede resumir entonces con un presidente Piñera que obtiene un resultado relevante en materia de segunda vuelta, pero que cuenta con minoría en ambas cámaras (Cruz & Varetto, 2018) sumado a la emergencia de nuevos actores, donde el más significativo es sin lugar a duda el Frente Amplio.

Más allá de la fuerza que ha adquirido en el ámbito de la política formal, el Frente Amplio (FA), considerado una especie de 'movimiento – partido (Martin, 2015) aparece como un importante eje articulador en el ámbito de los movimientos sociales, terreno en donde convergen – y divergen -nuevas fuerzas del campo político de las izquierdas a nivel nacional.

Las movilizaciones del año 2018

Parece preciso partir señalando que el objetivo de nuestra investigación responde a la realidad del conflicto estudiantil. Ahora bien, parece indudable que para cumplir con ese objetivo es preciso tener al menos un acercamiento parcial, al enorme estallido social, político y cultural que se producirá en el año 2018, durante el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera, en torno a la movilización de jóvenes universitarias y secundarias que marchan por una serie de demandas vinculadas a la problemática de género, pero sobre todo por una transformación profunda de la cultura de la sociedad chilena que reproduce dichas desigualdades e impacta negativamente sobre sus posibilidades de desarrollo.

Así, y como se dijo con anterioridad, el surgimiento del Frente Amplio respondió en parte a un déficit en la posibilidad de incidir en el debate sobre las reformas educacionales puestas en curso desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En este proceso, se vive una cierta disminución de la capacidad de movilización y de relevancia mediática del mundo estudiantil, aunque dicha situación contrastará con el paulatino y creciente



proceso de organización y de discusión política que se estaba dando al interior de las casas de estudios ante la problemática de género y que logra estallar en términos públicos por una serie de casos de abuso y acoso sexual que habían alcanzado alta impacto en términos de prensa, tanto escrita como hablada.

Este proceso movilizatorio logró una inédita convocatoria y masividad, que les permitió protagonismo en la arena pública con inmensas manifestaciones sociales y cuyo centro fueron las casas de estudios universitarias (Defina & Figueroa, 2019). El proceso de movilización generó un cuestionamiento muy profundo de las mismas formas de funcionamiento y organización que había generado hasta entonces el mismo movimiento estudiantil chileno, con prácticas y liderazgos que reproducían elementos que consideraban negativos y también con una imposibilidad de que las nuevas demandas del movimiento feminista asumieran centralidad.

Las manifestaciones fueron creciendo en adhesión y transversalidad, y a pesar de ciertos cuestionamientos pública que se refleja en algunas valoraciones negativas en encuestas, el movimiento parece haber salido del espacio universitario para convertirse en un movimiento transversal y con capacidad de convocatoria muy relevante, al punto de que el 8 de marzo de 2019 se conformó la movilización feminista más grande de toda América Latina y la segunda más grande en el mundo después de la de España y Madrid.

Además de lo anterior, el movimiento de las estudiantes universitarias y secundarias logró también posicionar de manera inédita en términos del alcance y amplitud de estas, la problemática de género y directamente el concepto de feminismo, que se volvió parte de la discusión cotidiana de la sociedad y también presente a través de los distintos medios de comunicación existentes en el país (De Fina & Figueroa, 2019). Dentro de los aspectos que potencialmente pudieron contribuir a dicha extensión, además de su capacidad organizativa y convocatoria en las movilizaciones, estuvo asociada al uso de nuevos repertorios de acción y formas de visibilización de sus experiencias y demandas (Molina, 2019), las cuales se articularon con otros repertorios como las marchas y las tomas, en las cuales también se reflejaron nuevas formas de convocatoria y principios organizativos que dotaron de un enorme dinamismo a la movilización.

La articulación de movimientos

Es indudable que la movilización del año 2018 tiene vínculos con la lucha de las y los estudiantes que se expresó con fuerza el año 2006 y 2011. Esto en múltiples términos. En primer lugar, parece necesario recordar que las luchas sociales estudiantiles abrieron



en el país un creciente, complejo y arduo proceso de politización de la sociedad chilena (PNUD, 2015) que impactó también en la capacidad de convocatoria y el número de manifestaciones que se han realizado en el país. A su vez, es indudable también, el que, en el seno del mismo movimiento estudiantil chileno, se abrieron espacio para nuevas discusiones durante estos años, asociados a las realidades locales de las universidades, la misma problemática de género, así como también de otras dimensiones como la realidad de los pueblos originarios, el medio ambiente, entre otros. Un aspecto que parece reflejar esta situación, mencionado por Follegati (2018) dice relación con que las secretarías de género que ocuparían un papel sumamente relevante en el proceso de movilización vivido durante el año 2018 eran parte de las federaciones estudiantiles que eran el principal soporte organizativo del movimiento estudiantil

Ahora bien, también creemos que es necesario hacer una distinción. Desde nuestra perspectiva, creemos que el movimiento feminista estudiantil logra conformarse como un movimiento propio, con autonomía de las luchas estudiantiles abiertas desde el año 2006 y 2011. Esto por distintas razones. En primer lugar, parece necesario reconocer el esfuerzo organizativo previo al interior de las casas de estudios sobre la organización feminista, que generó reflexiones propias y que estuvo crecientemente interpelando tanto a las estructuras formales de funcionamiento de las federaciones como también a las organizaciones políticas que participaban en su seno, entre ellas, varias organizaciones pertenecientes al Frente Amplio (Follegati, 2018). A su vez, el mismo movimiento feminista ha tenido hitos relevantes en su conformación, por ejemplo, asociados a la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la repartición de la pastilla del día después en el año 2008, o la campaña organizada por la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres denominada el “machismo mata”. Además, en términos de hitos al interior de las casas de estudio, es posible mencionar el Primer Congreso Nacional por una Educación No sexista formulada el año 2014, que constituyó un esfuerzo que permitió aunar diferentes espacios organizativos de numerosos grupos que reivindican diversos cuestionamientos al orden de género, y que parece reflejar la nueva condición de la sociedad chilena de los últimos años, con las nuevas demandas sociales, culturales y políticas que han operado principalmente desde el plano de la juventud (Lamadrid & Armijo, 2015). Es decir este movimiento contaba con una historia y trayectoria y demandas propias, que se reflejó con fuerza durante las manifestaciones producidas durante el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera.



Situación actual del movimiento estudiantil

Es indudable que el movimiento estudiantil chileno generó un impacto muy significativo en la sociedad, poniendo en discusión ámbitos que van más allá de lo estrictamente educativos, sino que abarcan al conjunto de la sociedad. Sin embargo, también es necesario reconocer que desde el año 2012 hasta el 2017, el movimiento estudiantil chileno ha venido manteniendo una baja en las convocatorias, con pequeños saltos en función de ciertas coyunturas políticas. Esto, además, repercute en su propia capacidad organizativa. Durante los momentos de mayor algidez del movimiento estudiantil, es posible observar una capacidad constante de convocatorias a espacios asamblearios y de discusión, los que evidentemente disminuyen en contextos donde se sale de la fase de mayor “visibilidad pública” y se procede a una discusión que se da en el plano legislativo.

El movimiento estudiantil así, en el momento legislativo, pierde capacidad de producir procesos de discusión que siga la mayor parte de las y los jóvenes movilizados. Se produce un fenómeno, de burocratización al interior del mismo movimiento estudiantil y con riesgos evidentes de muchas veces de fenómenos de tipo corporativistas al interior de las casas de estudios (Arellano & Aylwin, 2015), lo que dificulta su proyección y continuidad. Ello se suma a nuevas demandas que surgen al interior de las organizaciones estudiantiles. Se produce, además, otro efecto, asociado a la reproducción, en las mismas casas de estudios, de ciertas prácticas y discursos que reproducen los aspectos criticados en materia de género y una incapacidad de otorgar protagonismo a las nuevas demandas que en su seno emergían. Finalmente, también, parece ser difícil desconocer que la tramitación de las reformas impulsadas por el segundo gobierno de Michelle Bachelet impactó, ya sea porque para una franja de la sociedad se cumplían las demandas que habían sido puestas en la discusión pública, o ya sea también por la incapacidad del movimiento estudiantil, de influir conducir dicho proceso político, lo que genera desencanto y desmovilización. Hay, por tanto, un desgaste del movimiento estudiantil y de sus propias estructuras organizativas, lo que se refleja en las dificultades para integrar en su seno las nuevas demandas e intereses que surgían en las instituciones educativas a lo largo del país.

Los fenómenos de acción colectiva producidos durante el año 2018 dan cuenta de esta nueva realidad al interior de las casas de estudio universitarias, con la emergencia de un actor vinculado, pero al mismo tiempo autónomo, que promueve nuevas estructuras organizacionales y que genera también nuevas demandas que ocupan el centro de la



discusión. En ello, los actores identifican una serie de potencialidades, pero así también, se abren dudas sobre la proyección del conflicto estrictamente educacional y su capacidad de incidir o no en la agenda pública nacional.

El movimiento estudiantil observa, durante las últimas manifestaciones, cómo se produce nuevamente acciones que concitan alto respaldo ciudadano, convocatorias a marchas muy significativas y también procesos de movilización y organización interna que no se habían visto en los años precedentes. Se genera un cuestionamiento a muchas de las dirigencias estudiantiles y sus formas de estructuración, así como también se reconfiguran las principales demandas y prioridades de las y los estudiantes. El movimiento del año 2018 produce un verdadero remezón en la forma en que el movimiento estudiantil se organiza y se relaciona con la política.

Ahora bien, parece haber una comprensión generalizada que dicha situación otorga potencialidades al movimiento estudiantil, en tanto no se observan como fenómenos de acción colectiva contradictorios, sino más bien complementarios, donde las demandas educacionales entroncan de manera clara con la formulación de nuevos proyectos educativos, así como también nuevas formas y principios que deben regir en las estructuras organizativas existentes. Pareciese haber una comprensión de los actores asociadas a un desafío de constitución de un sujeto socio político plural, capaz de impulsar lo que identifican como las tareas principales de la sociedad chilena, esto es, la superación del modelo socioeconómico y político de la dictadura militar.

También, este nuevo proceso de movilización reabrió la discusión sobre la influencia de actores políticos al interior del movimiento social, especialmente de aquellos que incurren en la arena institucional. El surgimiento del Frente Amplio como actor sociopolítico, genera procesos de cuestionamiento, en tanto se observan potenciales riesgos de autonomía del movimiento social, un pilar fundamental, como se ha visto, en la lucha estudiantil. Es evidente que esta es una tensión que supera al mismo movimiento estudiantil y a las otras luchas sociales por sí sola, y parece tener vínculo con la profunda ruptura entre política y sociedad existente, así como a la crisis de legitimidad y de representación de la política chilena.

Conclusiones

La orientación que guía a esta investigación es que el futuro de una sociedad depende en gran parte de la capacidad de interrogarse sobre sí misma y de debatir estas interrogantes (Garretón, 2000). Tanto en América Latina, como también en el país, estamos en un proceso largo y complejo de reencuentro entre política y sociedad, para



que se constituyan en un marco institucional, nuevos actores y formas de articulación. Así, el problema de la ruptura entre el mundo social y el mundo político en Chile no ha sido resuelto en las últimas elecciones ni en el gobierno de la Nueva Mayoría, porque de lo que hablamos es de una sociedad que ya no se articula ni se expresa mayoritariamente a través de la política, como ocurría en el pasado. Sin repetir las fórmulas clásicas de relación entre partidos y actores sociales, es el desafío que hoy parece presentar nuestra sociedad (Garretón, 2017).

El caso del movimiento estudiantil chileno, y su influencia en la política y en la sociedad chilena, así como también en este nuevo partido – movimiento, el Frente Amplio, es sin duda fundamental para comprender los nuevos tiempos que se abren en el país, así como también sus tensiones y límites. Por ello, y sin desconocer que los movimientos sociales tienen cierta duración en el tiempo, parece relevante observar sus procesos de reconfiguración, las nuevas formas que promueve sus demandas y su relación con los distintos gobiernos y luchas sociales que han surgido al calor del neoliberalismo avanzado (Ruíz & Boccardo, 2014).

El movimiento estudiantil, sigue siendo un actor relevante desde el punto de vista social, aunque es indudable la disminución de su influencia y peso en el debate público. Ahora bien, las razones de fondo del malestar con la educación (Ruíz, 2007) siguen estando vigentes, por lo que es posible advertir que el movimiento estudiantil chileno, tiene posibilidades de reconfigurarse como un actor, sobre la base de estas nuevas condiciones y demandas que han surgido en este último tiempo.

Bibliografía

- Aguilar, S., & Romanos, E. (2018). El alcance de los cambios: Una propuesta analítica sobre las consecuencias de los movimientos sociales. *Revista Española de Sociología*.
- Arellano, F., & Aylwin, S. (2015). La desconexión entre sociedad y política. *Cuadernos de Coyuntura*, 8, 5-16.
- Atria, F. (2014). *Derechos sociales y educación: un nuevo paradigma de lo público*. Lom ediciones.
- Bachelet, M. (2014). Programa de gobierno Michelle Bachelet 2014-2018.
- Bellei, C. (2015). *El gran experimento: Mercado y privatización de la educación chilena*. Lom ediciones.
- Cruz, F., & Varetto, C. (2018). Crónica de un cambio anunciado. Las elecciones de 2017 en Chile frente al cambio de sistema electoral. *Estudios Políticos*, (54), 233- 258.



- De Fina, D. & Figueroa, F. (2019). Nuevos “campos de acción política” feminista: Una mirada a las recientes movilizaciones en Chile. *Revista Punto Género*, (11), 51- 72.
- Diani, M. (2015). Revisando el concepto de movimiento social. *Encrucijadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales*, 9, 0902.
- Follegati, L. (2018). El feminismo se ha vuelto una necesidad: movimiento estudiantil y organización feminista en Chile (2000-2017). *Revista Anales de la Universidad de Chile*, 7(14), 261-292.
- Garretón, M. A., Cruz, M. A., Aguirre, F., Bro, N., Farías, E., Ferreti, P., & Ramos, T. (2011). Movimiento social, nuevas formas de hacer política y enclaves autoritarios. Los debates del Consejo Asesor para la Educación en el gobierno de Michelle Bachelet en Chile. *Polis. Revista Latinoamericana*, (30).
- Garretón, M. A. (2000). Política y sociedad entre dos épocas. *América Latina en el cambio de siglo*, 65-91.
- Garretón, M. A. (2011). Movilizaciones y movimiento social en la democratización política chilena. In *La sociedad española en la Transición: los movimientos sociales en el proceso democratizador* (pp. 107-122).
- Garretón, M. A. (2014). *Las Ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina: Estudios sobre transformaciones socio-políticas y movimiento social*. LOM ediciones.
- Garretón, M. A. (2016). *La gran ruptura: institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. LOM Ediciones.
- Garretón, M. A. (2017). El proyecto de transformación y la crisis político-institucional de la sociedad chilena. El Gobierno de Bachelet entre 2014-2016. *Vientos de Cambio? Procesos Políticos en América Latina*.
- Lamadrid, S., & Armijo, L. (2015). Movimientos sociales críticos del orden de género a inicios del siglo XXI en Chile. In *Mesa 29 en Congreso Latinoamericano de Teoría Social Memorias del primer Congreso Latinoamericano de Teoría Social*. Buenos Aires, Argentina (Vol. 1, pp. 1-18).
- Marshall, T. H. (1997). *Ciudadanía y clase social* (Vol. 91). Anaya-Spain.
- Martín, I. (2015). Podemos y otros modelos de partido-movimiento. *Revista Española de Sociología*, (24).
- Molina, M. (2019). “Ni mal-pensadas, ni histéricas, ni locas”: sobre las resistencias a la interpretación de las experiencias femeninas en la movilización feminista estudiantil. *Revista Bricolaje*, (4), 18-28. Consultado de <https://revistabricolaje.uchile.cl/index.php/RB/article/view/52082/54654>
- Moulian, T. (1997). Chile actual: anatomía de un mito, ARCIS. *Santiago*.



- PNUD. (1998). Desarrollo Humano en Chile: Las paradojas de la modernización.
- PNUD. (2002). Desarrollo humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural.
- PNUD (2012). Informe de desarrollo humano en Chile. Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo.
- PNUD. (2015). Desarrollo humano en Chile. Los tiempos de la politización.
- Ruiz, C. (2007). ¿Qué hay detrás del malestar con la educación? *Revista Análisis del Año*, 20, 33-72.
- Ruiz, C., & Boccoardo, G. (2014). Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social. *Santiago: El Desconcierto*, 7.
- Ruiz, C. (2019). La política en tiempos del neoliberalismo. LOM ediciones.
- Santana, A., Rama, J., Arellano, R., & Montero, J. R. (2018). Análisis N° 30: Elecciones parlamentarias Chile 2017: los perfiles de los votantes.
- Senado Universitario (2015). Propuesta del senado universitario de la Universidad de Chile para la reforma del sistema de educación superior.
- Somma, N. M., & Bargsted, M. (2015). La autonomización de la protesta en Chile. *Socialización política y experiencia escolar: aportes para la formación ciudadana en Chile*, 207-240.
- Tilly, C. (2015). Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas. *Sociológica México*, (28), 13-36.
- Toro, S., & Valenzuela, M. (2018). Chile 2017: ambiciones, estrategias y expectativas en el estreno de las nuevas reglas electorales. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 38(2), 207-232.
- Urra, J. (2012): «La movilización estudiantil chilena en 2011». *Revista del Observatorio Social de América Latina*. Año XIII, N° 31, CLACSO.



Movimientos Estudiantiles Universitarios Latinoamericanos en el Siglo XX.

Luis Jesús Teneúd Navarro
Danuta Estrufika Canotia Luiz

Resumen

Dentro de los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles siempre tendrán un papel importante en la formación del liderazgo político y social de los diferentes países latinoamericanos durante el último siglo. Desde la Reforma de Córdoba, ha sido un sector identificado con la lucha por una sociedad más justa y en defensa de la democracia, y ha entrado en articulación con otros sectores sociales. Este trabajo presenta una sistematización histórica de los elementos constitutivos de los movimientos estudiantiles principales presentes en Brasil, Venezuela, Perú, Argentina, México, Chile, Uruguay y Colombia. El objetivo de este estudio es determinar las características principales de estos movimientos, identificando sus demandas, prácticas, reclamos y opositores, también buscando identificar los movimientos principales dentro del contexto sociopolítico latinoamericano. Metodológicamente, la investigación como recurso para la investigación bibliográfica en obras/ autores de referencia temática. Como resultado principal, se identificaron los movimientos estudiantiles en América Latina, destacando o actuando como defensores del cambio, no solo en educación, sino en lo político y social. Es decir, se constituyeron una serie de experiencias que, en algunos casos, fueron capaces de provocar cambios, dentro de las sociedades en las que se desarrollaron

Palabras clave

Movimentos Sociais; Movimentos Estudantis; América Latina; Democracia; Mudanças Políticas.

Introducción

La historia de la universidad latinoamericana está estrechamente ligada al desarrollo de la universidad en el mundo occidental, y más aún al desarrollo de las distintas propuestas políticas, económicas y sociales en el mismo.

Mientras áreas más técnicas eran enseñadas en academias superiores o bajo el patrocinio de las clases altas existentes, la universidad crecía bajo el dominio de la iglesia, con normas rígidas y con una estructura jerárquica estricta, donde los



estudiantes podían adquirir conocimiento, más la finalidad principal no era la preparación para el futuro desarrollo profesional. La América española y portuguesa no escapa a esta realidad, y así las primeras universidades surgidas en América copian el modelo español, principalmente de la mencionada universidad de Salamanca.

Posteriormente, en el siglo XIX, la universidad vivirá un proceso de transformación: la revolución industrial, el surgimiento de las ciudades modernas, las necesidades de gente especializada en las nuevas clases emergentes y el afianzamiento de las teorías de la ilustración, harán que la ciencia gane protagonismo sobre la religión, permitiendo el cuestionamiento de diversas estructuras existentes, entre ellas las de la propia universidad. Así, principalmente, en Francia, surge la visión de la universidad como el centro de formación de profesionales, como la institución que certifica que una persona está capacitada para poder realizar un trabajo, una visión mucho más positivista.

En paralelo al surgimiento de luchas obreras, sociales y de sectores tradicionalmente excluidos, los estudiantes universitarios comenzarán a buscar el reconocimiento de derechos y aspirarán ejercer un papel protagónico en sus instituciones, organizándose a partir de la primera década del siglo XX.

A continuación, se hará un breve recorrido por los momentos más determinantes de la historia del movimiento estudiantil en Latinoamérica durante el desarrollo de los siglos XX y XXI.

Como movimientos de interés, se tratarán los casos de Argentina, México, Colombia, Chile, Brasil y Venezuela, presentando un pequeño resumen de sus movimientos más importantes y de su desarrollo, se presentarán de forma muy resumida para explicar el contexto latinoamericano, pero sin profundizar, salvo en los dos últimos casos nombrados, que son objeto de este estudio.

Fundamentación del problema

Los movimientos sociales se han convertido en un tema de estudio importante desde la década de 1960, debido a las grandes movilizaciones en diferentes partes del mundo, reclamando derechos y luchas de grupos discriminados (no necesariamente grupos minoritarios), y su efecto sobre los cambios en la sociedad.

La lucha contra la discriminación racial en los Estados Unidos, los movimientos estudiantiles en Francia, así como el surgimiento de la juventud como actor social, principalmente a través de los grupos pacifistas que se opusieron a la guerra en Vietnam, y con el propio lenguaje y símbolos pueden crear una identidad y transmitir un



mensaje a nivel global, marcar un cambio en las relaciones políticas y sociales, fomentaron una mayor apertura democrática.

Aunque en América Latina los movimientos estudiantiles han existido desde principios del siglo XX y los cambios que traen consigo permiten mostrar un nuevo modelo después de 1918, es cierto que el ambiente de la Guerra Fría renovará su fuerza y peso en la Sociedad. En América Latina, esto se debe a dos factores: la incidencia de los jóvenes en todo el mundo y la intervención en las políticas internas de diferentes países latinoamericanos, lo que generará una serie de dictaduras en la región, principalmente de la derecha (como en el caso de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia), con pequeños espacios para la democracia (Venezuela) o para sistemas de aspecto democrático, pero altamente controlados (como México y Colombia).

Por lo tanto, el movimiento estudiantil puede clasificarse en la teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, no solo por su dinámica juvenil, sino también por su lucha por grupos que no tienen pleno acceso a la participación estudiantil o las necesidades de los miembros de la comunidad.

Metodología

Para la presente investigación se realizó una revisión bibliográfica que permitiera conocer los principales hitos y logros del movimiento estudiantil latinoamericano en los países seleccionados, se realizó un resumen de los momentos más importantes y se busco conocer su importancia encuadrado en el concepto de movimientos sociales.

Resultados y discusión

A continuación, se presentan las ideas y acciones mas importantes obtenidas de la bibliografía consultada, se detallan por cada uno de los países estudiados, los cuales son presentados en la siguiente figura:



Figura 1. Países a ser estudiados
Fonte: Ecured (2019). Datos organizados por los autores.

Argentina

La importancia de Argentina para entender cualquier movimiento estudiantil en Latinoamérica es vital, ya que si bien, existen varios movimientos previos a 1918, es la Reforma de Córdoba el principal referente de los movimientos estudiantiles, no solo como organización, sino como motor de reformas académicas y agente de cambio.

Para entender mejor el contexto argentino de principios de siglo, y profundizando en algunos elementos planteados previamente, la Universidad de Córdoba, replica el modelo medieval, con una fuerte influencia conservadora en su estructura, influencia religiosa, y ninguna posibilidad del estudiantado para poder expresarse, un sistema poco democrático, y con facultades de derecho, medicina e ingeniería, que son las carreras más importantes a inicios del siglo XX. Por el contrario, la Universidad de Buenos Aires, copia el modelo de la universidad moderna del siglo XIX, posterior a la revolución industrial, en la que lo más importante es la preparación del estudiante para el ejercicio profesional.

Envuelta en una estructura tan rígida, en medio de una economía floreciente y en un país que avanza hacia el desarrollo, mientras se dan importantes cambios sociales y políticos que impulsan un modelo de modernización y democratización, se entiende perfectamente por que el epicentro de la reforma es esta universidad argentina.

Las acciones de protesta formal se inician en diciembre de 1917, cuando se reclama la suspensión de los internados en el Hospital Nacional de Clínicas por razones económicas. A partir del 1 de abril se inicia la huelga, y diez días después es creada la



Federación Universitaria Argentina en Buenos Aires, con representantes de distintas universidades. El 7 de mayo el presidente Yrigoyen accede a convocar unas elecciones para el nombramiento de un nuevo rector, el cual sería electo por un claustro de profesores, a su vez electos en Asamblea. Si bien en la elección del claustro los reformistas obtienen una importante representación, la elección del rector favorecerá a los sectores conservadores. Sin embargo, los días previos y la propia elección del claustro, generan una gran tensión según Romero (1998).

Este revés, lejos de desmovilizar el movimiento reformista, acelerará sus reclamos, ese mismo día, iniciará una serie de protestas contra el nuevo rector y tomarán la universidad. El texto de la Reforma publicado el 21 de junio, es toda una exposición de motivos, en el mismo se señala:

Nuestro régimen universitario —aún el más reciente— es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La federación universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando. (Barros, Valdés e Bordabehere, 1918)

Las siguientes semanas, la protesta se radicalizará, incluyendo el nombramiento de profesores reformistas que les dicten las clases, y llevarán a la renuncia del rector primero, y luego a la intervención de la Universidad de parte del gobierno

En octubre, el conflicto se habría zanjado con la aplicación de la reforma, un año después se aplicarán en Buenos Aires, y en un plazo de 4 años ya se habrán aplicado en todas las universidades argentinas y se verá su influencia en el resto de Latinoamérica.

México

A pesar de la importancia del país norteamericano en el contexto de Latinoamérica, y del referente que marca el movimiento estudiantil del año 1968 como referencia, casi tan importante como la de 1918 en Argentina, la verdad es que el movimiento estudiantil



mexicano es uno de los más tardíos, tal vez por las propias características políticas del país.

Uno de los años más representativos en la lucha estudiantil en Latinoamérica se tiene en 1968, cuando durante casi todo el año, una serie de protestas estudiantiles se hicieron sentir, pero además por recordarse una de las más sangrientas acciones que haya tomado gobierno alguno contra cualquier movilización universitaria. Las protestas tendrían un inicio más bien curioso, una pelea callejera entre estudiantes de dos escuelas, la Vocacional N° 2 y la Isaac Ochoterena, fue excesivamente repelida por los granaderos de la policía, generando varios heridos. Entre el 13 de septiembre y el 1 de octubre el campus de la UNAM fue tomado por cuerpos militares del estado, quienes a su entrada detuvieron y agredieron a todo el que se encontrara en el recinto académico. El 2 de octubre se da una concentración en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, Morin Reyes (1988) explica estos hechos:

El día 2 de octubre, a las cinco de la tarde fue convocado un mitin, y a él acudieron, no sólo estudiantes y sus líderes, sino padres de familia acompañados de sus hijos, algunos de éstos de brazos. Un poco antes de las seis de la tarde comenzaron los discursos de los oradores, estando todos bien custodiados por policías, unos uniformados y otros vestidos de civil, un poco más retirados, elementos del ejército nacional. Un helicóptero que sobrevolaba por encima de los manifestantes, lanzó una luz verde, que posteriormente se supo, fue la señal para que las corporaciones se lanzaran al ataque. Los disparos se cruzaron en todas direcciones, haciendo blanco en personas manifestantes y curiosos que quedaron encerrados en un círculo de la muerte. Los policías y soldados disparaban incluso a quemarropa; hubo gritos, confusión, histeria, pánico. "La gente que podía hacerlo corría enloquecida para escapar de aquel círculo mortal. Cuando el sol ya se había ocultado en el poniente y las sombras de la noche comenzaron envolver la plaza de las Tres Culturas, el silencio, un silencio sólo violado por las sirenas de las cruces roja y verde que acudían a levantar a las víctimas de la tragedia" (p. 138-139)

El 12 de octubre, son inaugurados los Juegos Olímpicos, estos serán recordados por su fuerte contenido político, desde las secuencias de la reciente masacre, hasta los actos de protesta de las Panteras Negras contra la discriminación racial en Estados Unidos en distintas ceremonias de premiación.



Colombia

Como explica Yépes (2014), se puede decir que el movimiento estudiantil colombiano es débil y tardío en su surgimiento, a pesar de manifestarse desde los años 1910, su punto de mayor notoriedad no se hará patente hasta 1971.

Colombia recibe el siglo XX con los conservadores en el poder, una sociedad donde la Iglesia retoma su papel protagónico dentro del Estado y donde el poder se centraliza borrando cualquier vestigio de federalismo que hubieran podido iniciar los liberales durante el siglo XIX. Además, la pérdida de Panamá, acción incentivada por Estados Unidos para la construcción del Canal, agita el clima político y aumenta los reclamos de los sectores más jóvenes.

Sin embargo, el año de mayor importancia para el movimiento estudiantil colombiano sería 1971, cuando en medio de un clima turbulento y aun bajo el ambiente del mayo francés, un paro iniciado en la Universidad de Valle, toma carácter nacional en un par de meses, y se prolonga en diferentes acciones por más de un año. Archila (2012) resume el inicio de las protestas:

Desde mediados de 1970 se pedía el cambio del decano de Ciencias Sociales por estar comprometido con un ente financiero intermediario llamado FES (Fundación de Educación Superior). Los estudiantes exigían participación en la elección del nuevo decano. Ante el fracaso de estos reclamos se decreta a fines de enero de 1971 un paro en la Universidad del Valle que a mediados de febrero recibe el respaldo de todas las universidades públicas y algunas privadas. Luego viene una jornada nacional de protesta el 26 de febrero que deja en Cali un estudiante muerto, Edgar Mejía. El gobierno condenó la marcha tachándola de subversiva y decretó el estado de sitio. Esto generalizó el movimiento y prácticamente todas las universidades públicas y algunas privadas entraron en paro mientras realizaban nuevas jornadas de protesta. (p. 82)

La organización del estudiantado logra estructurar un pliego de demandas. La represión desmedida de parte del estado, sumado al cierre temporal de las universidades, agudizará el conflicto y le dará un carácter social, las demandas de autonomía y de participación no son escuchadas por el gobierno nacional, quien por el contrario decide apresar a los líderes del movimiento y nombrar rectores de carácter más autoritario en cada institución, además de concentrar el poder en ellos. Finalmente, a finales del año 1971, se logran algunos acuerdos, sin embargo, en mayo de ese año, el gobierno disuelve los órganos de cogobierno electos democráticamente, y restituye las funciones exageradas a los rectores, finalizando este movimiento.



En 1990 y 2016, se volverán a estructurar movimientos de fuerza en Colombia, pero estos, movidos más por la esperanza que por la rebeldía, se concentrarán en apoyar la convocatoria a una Asamblea Constituyente en el primer caso, y el apoyo en referéndum al tratado de paz en el segundo. Las demandas de estos movimientos responden más a lo político que a lo estrictamente académico, demostrando que el estudiantado, en cualquier país, no puede permanecer al margen de las demandas que su sociedad promueve.

Chile

El movimiento estudiantil chileno fue uno de los primeros organizados en América Latina, al organizarse desde el año 1906. Es importante conocer que, tras la ascensión al poder de Augusto Pinochet en 1973, los partidos políticos comenzaron a sufrir persecución de parte del gobierno y todas las estructuras democráticas fueron desmontadas, incluyendo las propias de las universidades. Pinochet presentó una nueva ley de Universidades, sistema que mantendrán los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet en el cual el aporte privado representa la mayor fuente de financiamiento (cerca de un 75%), dejando un aporte mínimo de parte del Estado, generando a lo largo de años un creciente descontento de parte de diversos sectores, que ven como la educación pública es prácticamente inexistente en el país.

Igualmente, las diferencias entre los distintos niveles de universidad favorecen la formación de élites y la consolidación de diferencias sociales en la sociedad chilenas. Así, en el año 2006, ante el anuncio del aumento del costo de las pruebas de ingreso a la educación superior, y de la disminución de los derechos en el transporte público para la población estudiantil, los jóvenes estudiantes de educación secundaria, iniciaron una serie de protestas entre los meses de mayo y junio y posteriormente de septiembre a octubre, en lo que se conoció como “La Revolución de los Pingüinos”, dado el uniforme de los jóvenes de educación media, con camisa blanca y pantalón negro. Si bien la protesta no logró cambios importantes, y la nueva ley universitaria promulgada en 2009, no distaría mucho de la vigente.

En abril de 2011 surge un nuevo movimiento, como explica Cañas (2011), cuyas demandas incluyen: mayor igualdad de oportunidades en el ingreso a la educación, aumento del gasto público en educación superior, participación estudiantil en distintas instancias, y gratuidad en las pruebas de selección e ingreso para los estudiantes de educación media con pocos recursos y altas calificaciones.



Fuera del pliego oficial, se incluyen algunas otras solicitudes de mayor impacto social, como modificaciones a la ley y convocatoria a una asamblea constituyente, que permitiera la redacción de una constitución más inclusiva.

En junio se anunció la radicalización de las protestas, y se iniciaron una serie de protestas y marchas multitudinarias, a las que poco a poco se unían otros sectores, como estudiantes de educación media y de universidades privadas, trabajadores de la industria del cobre, y ciudadanos, en la marcha del 16 de junio se estima la participación de cerca de 100000 personas solo en la ciudad de Santiago.

En agosto, el gobierno presentará dos propuestas más, al tiempo que se siguen realizando protestas, incluida la llamada “Marcha de los Paraguas”, en la cual más de cien mil personas se movilizaron bajo la lluvia. Para el mes de septiembre, el gobierno y los representantes estudiantiles inician unas mesas de trabajos que buscan solucionar el conflicto, el establecimiento de este mecanismo (que no cumpliría todas las demandas planteadas), más la derrota de algunos líderes, como Camila Vallejo, en sus respectivas universidades, llevaría al final de las protestas.

Venezuela

En un entorno de pocas libertades y rechazo a las ideas más cercanas a la izquierda se celebra en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en febrero de 1927 la Semana del Estudiante, un evento que debía servir para celebrar al estudiantado y cuya actividad principal era la coronación de una reina estudiantil, terminó convirtiéndose en el centro de diversas proclamas estudiantiles a favor de la libertad, en contra del dictador y proponiendo un nuevo modelo de gobierno.

Aquellos jóvenes influenciados por ideas marxistas, rápidamente ganaron fama y se convirtieron en referentes, si bien los actos en la universidad y las posteriores manifestaciones que se originaron como consecuencia de la represión y persecución a los protagonistas de los mismos, tuvieron una duración muy breve y sus protagonistas en poco tiempo estaban en la cárcel o en el exilio. Esta es la famosa “Generación del 28”, que aun 90 años después es tomada como referencia de los movimientos estudiantiles en Venezuela

Una nueva dictadura militar gobernará Venezuela entre 1948 y 1958, los últimos días de este gobierno, liderado por el General Marcos Pérez Jiménez, se caracterizaron por una serie de protestas ciudadanos de distintos sectores, en las cuales los jóvenes estudiantes universitarios, esta vez principalmente de la privada Universidad Católica



Andrés Bello (UCAB), juegan un rol importante, en apenas dos meses de protestas el país recupera la democracia y se inicia un periodo de estabilidad liderado principalmente por los partidos COPEI (ya mencionado), y Acción Democrática (AD) y Unión Republicana Democrática (URD), ambos creados por los antiguos protagonistas de la generación del 28.

Así, en el año 2007, un grupo de estudiantes de las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar, Católica Andrés Bello, Metropolitana y Nueva Esparta, toma las calles de Caracas como protesta por el cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV), y durante dos meses realizan una serie de protestas reivindicando reclamos sociales y de defensa de la universidad, aquella generación, según Cavet (2008) lograría propinar a Chávez su única derrota electoral, en el referéndum para la modificación de la constitución de diciembre de 2007.

Brasil

Si bien se conoce movimiento estudiantil en Brasil desde principios del siglo XX, no es hasta el año de 1937 cuando se organiza la Unión Nacional de Estudiantes, que será el referente del accionar estudiantil desde ese momento hasta la actualidad.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la campaña el petróleo es nuestro será impulsada por la UNE, en el marco mundial de entonces, el hidrocarburo resulta de vital importancia para la industrialización y el desarrollo de los distintos países, por lo cual, en el contexto latinoamericano, es visto también como un tema de defensa de soberanía. sobre esta campaña.

La campaña, que movilizó a diversas entidades estudiantiles y a otros grupos sociales (como militares y periodistas), materializó la discusión de la emancipación económica de Brasil a partir de la nacionalización de las riquezas naturales, así como su adecuada explotación por el propio Estado. Para Roberto Gusmão, presidente de la UNE en 1947 el movimiento en torno al petróleo fue el punto de discusión encontrado por el movimiento estudiantil para involucrar a los estudiantes en la participación política; la UNE en sus circulares estimulaba a todas las demás entidades a profundizar en tal debate y obtuvo la adhesión de diversos grupos sociales interesados en la cuestión nacional.

Así, uno de los momentos estelares de la UNE se da en los años 60, ya que en simultáneo se convierte en uno de los bastiones más fuertes de lucha contra la dictadura militar que sucedió a Goulart, pero al mismo tiempo sufre fuertes persecuciones y



atropellos con centenas de líderes encarcelados y movimientos importantes de protesta tras los atropellos cometidos por el gobierno, como el asesinato Edson Luis.

Según explica Muller (2010) y se verifica con el trabajo de Vecchia (2011), tras más de una década de persecución, y de sufrir torturas, cárcel e incluso el asesinato de varios líderes, a finales de los años 70 la UNE retoma su rol protagónico luchando por la democracia, además diversas agrupaciones estudiantiles a través de pastorales y presentaciones artísticas se unirán a la lucha por un nuevo sistema que garantice el respeto de los derechos de los ciudadanos.

En contraste a los países mencionados previamente la UNE representa una de las estructuras estudiantiles más organizadas en el contexto latinoamericano, ya que no solo se cuenta con una Unión Nacional, sino que existen representaciones igualmente organizadas a nivel estatal, así mismo, la UNE representa la organización de movimientos sociales más longeva en el país.

Uruguay

Por su cercanía con Argentina, el movimiento uruguayo se ve influenciado por la Reforma de Córdoba, pero no será hasta 1929 cuando es creada para la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU).

En oposición a la dictadura de la década de 1930, hay una huelga y las universidades toman posición el mismo día que Gabriel Terra tomó el poder en 1933, dos años después, las protestas se extienden para culminar con la intervención del gobierno y el encarcelamiento de líderes y maestros. Se refleja así, el compromiso de los estudiantes uruguayos con la libertad y su preocupación por los asuntos políticos nacionales e internacionales.

Las luchas políticas y económicas sobre la política nacional también están presentes en el movimiento uruguayo, dando algunos de los momentos más destacados, uno de los principales focos de lucha y resistencia contra las dictaduras de los años 30 y 70 estas actividades son referidas en la obra de Clemente (2008).

Uno de sus momentos de mayor organización y crecimiento ocurre en la década de 1960, cuando la influencia, como en el resto de América Latina, del reciente triunfo de la revolución cubana, y especialmente las demandas del mayo francés, fortalecen los movimientos que pueden mostrar un liderazgo importante en el movimiento estudiantil uruguayo, rompiendo con la posición neutral o de "terceros" con la que solía identificarse



el movimiento estudiantil uruguayo. Markarian (2011) describe la influencia de los problemas económicos y sus efectos en la población, que generan desigualdades.

Desde el golpe de estado de 73, y después de una década de tensión, nuevamente los estudiantes toman la bandera de la defensa de la democracia, siendo la federación perseguida y anulada la autonomía universitaria. La creación de la "Comisión para el Encuentro de Uruguayos" es uno de los mayores avances que los estudiantes harán para rescatar la democracia uruguaya en la década de 1980.

Perú

Comprender el movimiento estudiantil peruano es interesante: la importancia que tuvo Perú durante la era colonial, la herencia que recibió de muchas de sus instituciones y la clase dominante gobernante le permitió al Perú tener instituciones universitarias consolidadas al mismo tiempo. Siglo XIX, pero eso solo sirvió a los intereses de la oligarquía, ya que el país tenía una estructura rígida y tradicional.

En 1919, explica Casalino (2018), se lleva a cabo una segunda reforma universitaria en Perú, pero en realidad es la primera de importancia. Se podría hablar de una primera reforma a mediados del siglo XIX, llevada a cabo bajo la visión positivista del gobierno, que buscaba generar profesionales en áreas consideradas arbitrariamente de interés para el desarrollo del país y bajo las pautas del poder. central. Más bien, es la reforma de 1919, una consecuencia directa de la reforma de Córdoba, y un movimiento que buscará transformar la sociedad peruana, con una organización y claridad de objetivos raramente vistos en otros movimientos.

Esta incorporación ocurre naturalmente, reforzando el papel de la universidad como un medio de promoción social a través del conocimiento y la capacitación para el trabajo, pero también a través de programas y propuestas que buscan asegurar que la universidad cumpla una función social. vinculados a su entorno, como la promoción de planes de alfabetización en sectores populares, permitiendo que más peruanos voten.

Del mismo modo, habrá una serie de conflictos entre docentes y estudiantes en los próximos años, pero siempre enfocándose en el campo académico y la búsqueda de una educación de nivel, estos conflictos pueden resolverse de manera apropiada y pacífica. El movimiento estudiantil reformista permitirá la aparición de líderes políticos clave y partidos de izquierda en el mediano plazo con una propuesta latinoamericana como el APRA fundado por Víctor Raúl Haya De La Torre, que estuvo cerca de convertirse en presidente en varias ocasiones.



Conclusiones

Se puede observar como el movimiento estudiantil latinoamericano ha sido un gran generador de cambios en distintas sociedades latinoamericanas, la inestabilidad democrática de la región ha producido el surgimiento de diversas dictaduras, ante las cuales los movimientos estudiantiles han aumentado su voz y han servido como catalizador de reclamos y aspiraciones de cambio.

Igualmente, en regímenes democráticos, cuando estos no han sabido dar respuesta a las demandas de una sociedad más justa, los movimientos estudiantiles han servido de opositor a los atropellos y han fijado barreras a ellos.

Ideológicamente la mayoría de los movimientos estudiantiles han estado ligados a visiones de izquierda a lo largo de la historia, pero es más justo señalar que se han opuesto a los atropellos de cualquier gobierno. Dada la propia dinámica latinoamericana, los movimientos estudiantiles han buscado una mayor democratización de las instituciones universitarias y un cambio en la propia sociedad.

Bibliografía

Archila, M. El movimiento estudiantil en Colombia, una mirada histórica. Revista del OSAL, Buenos Aires, v. 31, p. 71-104, Mayo 2012. ISSN 1515-3282.

Barros, E.; Valdés, H.; Bordabehere, I. La Juventud Universitaria de Córdoba a los Hombres Libres de Suramérica. Córdoba, Argentina: [s.n.]. 1918. p. 1-3.

Cañas Kirby, E. Movimiento estudiantil en Chile 2011: Causas y características. Revista de Historia y Geografía, Santiago de Chile, n. 34, p. 109-134, 2016. ISSN 0719-4145.

Casalino Sen, C.; Rivas Huarcaya, J. C.; Toche, C. L. La Reforma Universitaria y el movimiento universitario en el Perú de 1919: Análisis de sus dimensiones institucionales, sociales y políticas. Estudios, Córdoba, Argentina, n. 40, p. 33-55, Julio-Diciembre 2018. ISSN 0328-185X.

Cavet, G.; Bastos, J. D.; Torrealba, M. Resurgimiento del movimiento estudiantil venezolano (Causas y consecuencias). Relatório interpretativo (Comunicación Social)-UCV. Caracas, p. 183. 2008.

Clemente, I. La juventud uruguaya, 1930- 1959: A la búsqueda de una nueva identidad nacional. Ambitos: revista de estudios de ciencias sociales y humanidades, Córdoba, Argentina, v. 20, p. 95-106, Diciembre 2008. ISSN 1575-2100.

Gohn, M. D. G. Teorias dos Movimentos Sociais: Paradigmas clássicos e contemporâneos. 1°. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1997.



Markarian, V. Sobre viejas y nuevas izquierdas. Los jóvenes comunistas uruguayos y el movimiento estudiantil de 1968. *Secuencia*, Cidade do México, v. 81, p. 161-186, Septiembre-Diciembre 2011. ISSN 0186-0348.

Morín Reyes, J. G. El movimiento reformista universitario mexicano 1929-1968, su importancia y significado. *Disertación (Maestría en Enseñanza Superior)- UANL*. Monterrey, p. 153. 1988.

Müller, A. A resistência do movimento estudantil brasileiro contra o regime ditatorial e o retorno da UNE à cena pública (1969-1979). *Tesis de doctorado (História Social)-USP*. São Paulo, p. 138. 2010.

Romero, R. La lucha continua: El movimiento estudiantil argentino en el siglo XX. 1°. ed. Buenos Aires: FUBA, 1998.

Vechia, R. D. S. D. O ressurgimento do movimento estudantil universitário gaúcho no processo de redemocratização as tendências estudantis e seu papel (1977/1985). *Tesis de doctorado (Ciência Política)- UFRGS*. Porto Alegre. 2011.

Yepes Grisales, D.; Calle León, V. S. Hacia la historia del Movimiento Estudiantil en Colombia: Elementos teórico-metodológicos fundamentales. *Trans-pasando Fronteras*, Cali, n. 6, p. 217-240, Diciembre 2014. ISSN ISSN 2248-7212.



Movimientos sociales y justicia hídrica: La experiencia de la Asamblea de Afectados Ambientales en México.

Patricia Ávila García¹

Resumen

¿Cuáles son las aportaciones de los movimientos sociales en la construcción de una justicia hídrica alternativa? Con el fin de responder se analizan las estrategias innovadoras de los movimientos sociales frente a la emergencia de conflictos socioambientales por el agua y la falta de acceso a la justicia ambiental. Se documenta la experiencia de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), que presentó el caso México ante dos tribunales éticos: el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con el fin de mostrar el papel del Estado, en su alianza con el sector privado (nacional y transnacional), en la generación y agravamiento de los conflictos socioambientales. La estrategia metodológica consistió en la revisión de literatura teórica y temática y de documentos de ANAA, TLA y TPP; trabajo de campo con algunos movimientos sociales; y participación como jurado del TLA y TPP. Entre los hallazgos está la construcción de una justicia hídrica alternativa, que deja una huella sociocultural en los movimientos socioambientales: a) las demandas son escuchadas en espacios creados por la propia sociedad como una crítica al Estado por negar acceso a la justicia; b) los propios actores sistematizan la experiencia de lucha y muestran con claridad el agravio y sus responsables, a través de las pruebas y evidencias formales y no formales; y c) el aprendizaje social del ejercicio de la justicia alternativa permite a los actores formar alianzas ante el diferencial de poder con el Estado y tener mayores posibilidades de negociación del conflicto.

Palabras clave

Estado; Movimientos sociales; Justicia hídrica; Tribunales éticos; Mexico.

Introducción

En las últimas tres décadas, México ha experimentado transformaciones importantes en su modelo económico, que han reforzado las condiciones de dependencia y pérdida de la soberanía nacional. Esto es como resultado de su inserción en la mundialización capitalista (Osorio, 2004), que en el lenguaje neoliberal se denomina globalización y libre mercado. La expresión más clara es el establecimiento de nuevas formas de



colonización del territorio (Ceceña, 2008 y Alimonda, 2011) que conllevan a la extracción y explotación de recursos naturales estratégicos (minerales, petróleo, agua, biodiversidad); así como a la realización de megaproyectos (como infraestructura hidráulica, energética y comunicaciones) para atraer la inversión privada (sobre todo transnacional) hacia regiones otrora imposibles por su condición geográfica (selvas, bosques, desiertos, humedales, costas) y tenencia de la tierra (propiedad social y estatal).

Para posibilitar la avanzada neoliberal, el papel del Estado ha sido determinante: desde impulsar las reformas económicas y firma de acuerdos comerciales internacionales hasta promover cambios legales e institucionales a nivel nacional, para abrir el paso al libre comercio y ascenso de actores privados (Osorio, 2004). Esto en los hechos ha significado una nueva forma de despojo, que es conocida como acumulación por desposesión, ya que se basa en formas originarias de acumulación del capital junto con nuevas formas que conllevan a la apropiación de los bienes comunes y la devastación ambiental (Harvey, 2004).

Los conflictos socioambientales y las resistencias locales en defensa del agua y territorio

El resultado de la estrategia del Estado, en su alianza con el sector privado, para afectar territorios con población indígena y campesina, donde se ubican los recursos naturales estratégicos, ha sido el surgimiento de un sin número de conflictos socioambientales, que son entendidos desde la óptica de la Ecología Política como conflictos ecológicos distributivos (Martínez Alier, 2004).

Más aún son aquellos conflictos asociados con el acceso y control de recursos estratégicos en condiciones de desigualdad de poder, así como por la afectación de los procesos de consumo y producción de la economía dominante. En este sentido se coincide con la definición Paz (2012) que señala que son una expresión de la relación sociedad-medio ambiente en el marco del modelo dominante y donde está en disputa el poder, a través de las resistencias, propuestas y respuestas contra hegemónicas.

La demanda central de las luchas y movimientos sociales que han emergido es por la defensa del territorio y el control social y comunitario de su patrimonio natural y cultural (agua, suelo, bosques, biodiversidad, lugares sagrados). Las respuestas sociales han sido una expresión de las decisiones verticales y cupulares de las élites económicas dominantes, que han contado con el apoyo del Estado para imponer megaproyectos



que violentan la propia legalidad y derechos humanos esenciales. Los casos de oposición social a la construcción y operación de minas (San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas), proyectos turísticos e inmobiliarios (Cabo Pulmo, Costa Alegre, Holbox, Cancún), presas hidroeléctricas (Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Veracruz), vialidades (Ciudad de México, Cuernavaca, Morelia) y trasvases de agua (Sonora, Jalisco, Estado de México), se han multiplicado en todo el territorio nacional.

En el estudio de Paz (2012) se hace una tipología de los conflictos socioambientales en México, donde destaca la importancia de los conflictos asociados con la construcción de presas, acceso al agua potable y contaminación de cuerpos de agua. Si bien no es exhaustiva, al menos da una idea de los conflictos que han emergido en los últimos años; y las demandas principales que está planteando una sociedad, que se siente afectada por los procesos económicos dominantes y los proyectos que pretenden realizarse, sin consulta alguna, en su territorio.

Lo que en los hechos representa una agresión y violencia de Estado, ante una afectación directa donde el culpable (sector estatal y privado) no es sancionado por contaminar las aguas para uso humano y productivo o por destruir los ecosistemas; ni tampoco se consideran las necesidades de la población local y sus formas de vida en los territorios donde se realizará el despojo o afectación ambiental (casos de la industria minera y petrolera, entre otras). Paz (2012) registra 95 conflictos, en el periodo 2009-2011, en al menos 22 estados del país, donde 37 conflictos están asociados con el agua. Los estados con más conflictos socioambientales son Oaxaca (12), Morelos (10), México (9) y Jalisco (8).

La ANAA (2012) hace una revisión más exhaustiva de los conflictos del agua a nivel de cuenca hidrológica y documenta 220 conflictos, de los cuales 157 se concentran principalmente en las cuencas de: México, Río Balsas, Río Santiago, Grijalva Usumacinta, Lerma-Chapala. Río Pánuco, Río Verde, Río Papaloapan, Río Bravo y Península de Yucatán.

La devastación hídrica en México y los movimientos socioambientales

Del lado de la sociedad civil mexicana, ha habido desde el año 2006 iniciativas importantes para hacer visible el papel del Estado y las corporaciones y empresas privadas nacionales y transnacionales como responsables de la devastación hídrica y ambiental y la violación de derechos individuales y colectivos como el DHAYs y los DESCA. A través del ejercicio y reflexión colectiva, junto con los dictámenes y sentencias de jurados y expertos internacionales que participan en tribunales éticos



como el Tribunal Latinoamericano del Agua y el Tribunal Permanente de los Pueblos, se ha llegado a conclusiones que evidencian el desvío de poder para hacer posible el despojo de tierras y agua y minimizar el deterioro ambiental. Esto con base en la participación de audiencias de los citados tribunales donde se han expuesto y documentado casos de despojo y/o agravios en los derechos esenciales de individuos y colectividades, así como afectaciones irreversibles a los ecosistemas y recursos hídricos que ponen en riesgo la sustentabilidad ambiental por la voracidad de intereses económicos, que son protegidos por el Estado. Todo ello sin importar si se violentan las leyes, deterioran las instituciones públicas y niegan el acceso a la justicia a los afectados, principalmente campesinos e indígenas.

En la petitoria de 562 páginas presentada ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA, 2012), que reúne a más de 130 organizaciones y movimientos sociales del país, se acusa al Estado mexicano como responsable de la devastación del sistema hídrico nacional.

Esto se traduce en que el poder del Estado ha sido capturado y desviado para utilizarse con funciones y fines distintos a lo establecido por los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución Mexicana y los acuerdos internacionales. La ANAA (2012) documenta las violaciones a la ley por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con base en tres auditorías (2007, 2008, 2009) realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Además la cantidad de casos mexicanos presentados en las audiencias internacionales del TLA desde 2006 muestra el drama nacional que viven individuos y colectivos que ven negado su acceso a la justicia. Destaca el hecho de que México es el país latinoamericano que más casos ha presentado en esa instancia, aspecto que influyó en que se analizara en 2012 no como un caso aislado de devastación hídrica, sino como un caso complejo de desvío de poder del Estado para favorecer intereses privados. Para ello, la ANAA (2012) argumenta que el Estado simula tener una política hídrica y ambiental que respeta los derechos humanos individuales y colectivos y protege el agua y el medio ambiente. En su veredicto el jurado del TLA (2012) resuelve:

- 1. Condenar al Estado mexicano por la violación a los tratados internacionales y al ordenamiento jurídico interno que garantizan el derecho al agua como derecho humano fundamental y la incapacidad de las autoridades del ejecutivo, legislativo y judicial para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental;*



2. *Reconocer el creciente deterioro del derecho humano al agua en la República Mexicana y la insuficiencia de los mecanismos jurídicos-políticos para detenerla;*
3. *Alertar por los niveles de conflictividad social en la República Mexicana y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla*

De acuerdo con Rosas (2009), el análisis de los casos de destrucción de los recursos hídricos en el país, muestra las distintas formas de incumplimiento o violación de la ley por el propio Estado. Además señala que los conflictos hídricos exhiben una particular forma de incumplimiento o violación de la ley por el Estado, pero no muestran su responsabilidad general en la crisis del agua. Así aparecen corrupciones, omisiones, violaciones, complicidades y daños provocados por agentes particulares que muestran el tipo de relación entre la sociedad civil y el Estado. La repetición continua de estas prácticas muestra la sistematicidad en la actuación del Estado y exhiben los distintos ámbitos en que las leyes establecidas son insuficientes para abordar la complejidad de los conflictos del agua.

El mismo autor señala que la desfiguración del sistema jurídico mexicano en materia de aguas propicia una simulación (una desviación de poder), un ocultamiento de la crisis del agua o su manejo político oportunista, lo cual permite a las autoridades sostener incluso que la crisis interna del agua no es responsabilidad del Estado mexicano (ni de la incompetencia o corrupción de quienes lo conducen), o bien, que la crisis externa del agua no mantiene relación alguna con la interna. De cualquier modo, se recurre a todos los medios posibles para ocultar la crisis interna del agua, provocada y permitida por el Estado mexicano (Rosas, 2009).

En ese mismo sentido, el Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, a través de la mesa de devastación ambiental y derechos de los pueblos concluye en 2014 que el Estado mexicano en alianza con empresas privadas y nacionales, es el responsable de una crisis ambiental e hídrica que violenta los derechos humanos (TPP, 2016: 464).

En resumen, el Estado mexicano es directamente responsable de la violación masiva y sistemática del derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo sustentable de la humanidad, así como es responsable de la violación del derecho a una calidad de vida adecuada, del derecho a una vivienda adecuada, al agua y saneamiento, a la alimentación, al desarrollo, a una indemnización y reparación adecuadas, a la información y participación y a la consulta.



En la sentencia se especifica que la devastación hídrica es resultado de un modelo de gestión que busca garantizar los intereses económicos por encima de los intereses sociales, culturales y ambientales.

Es importante señalar que el sustento empírico de la sentencia se basa en 14 pre-audiencias y 1 audiencias donde se expusieron 500 casos de despojo y afectación ambiental en 21 estados, entre los años 2012 y 2014. Varias pre-audiencias tocaron como tema central el problema del agua como: devastación hídrica, presas, cuenca Lerma, río Atoyac, Puebla-Tlaxcala, entre otros.

La sociedad civil organizada (luchas y movimientos socioambientales) documentaron con evidencias legales y otros medios (videos, estudios técnicos) las violaciones a sus derechos humanos por parte de actores estatales y privados. Tan solo para dar muestra de este ejercicio ciudadano independiente se muestran los casos expuestos en la pre-audiencia de devastación hídrica celebrada en San Miguel Allende.

Acciones y prácticas sociales para el acceso a la justicia hídrica desde la dimensión de los derechos humanos

Las acciones y prácticas emprendidas por la sociedad civil y en particular las organizaciones sociales y coaliciones para la defensa de los derechos humanos (DHAyS y DESCAs) y contra los agravios causados por el Estado y las empresas privadas nacionales y transnacionales, han consistido en: campañas públicas y movilización social para la defensa del agua, formación de redes de defensa frente al despojo y devastación hídrica, incidencia legal y litigación en materia de DHAyS y DESCAs, cabildeo en instancias nacionales e internacionales para la observancia de cumplimiento de los derechos humanos y desarrollo de capacidades como la documentación de los agravios y afectaciones a colectividades en tribunales de justicia hídrica y ambiental (FAN Global, 2010).

Campaña pública y movilización para la defensa del DHAyS

En 2005 se integró en México un frente de organizaciones sociales y comunitarias denominada Coalición Mexicana por el Derecho al Agua (COMDA) frente a las amenazas de privatización del agua como resultado de las políticas neoliberales impulsadas por organismos supranacionales como el Banco Mundial. En el marco de la realización del Foro Mundial del Agua en México en 2006, COMDA organizó un foro internacional paralelo y organizó una marcha para demandar el reconocimiento del derecho humano al agua en la declaratoria mundial y la exigencia al Estado mexicano



para su incorporación explícita en la ley, normatividad y políticas públicas. Posteriormente se articularon con otras organizaciones e iniciativas internacionales para presionar a los Estados a reconocer este derecho y su implementación en sus países. Como resultado en 2010 se reconoció este derecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde México fue país firmante y posteriormente lo ratificó. Un par de años después pasó este derecho a rango constitucional, aunque no se avanzó en la aprobación de una ley de aguas que incluyera esta dimensión, situación que lo ha llevado a rebasar el plazo requerido para su formulación.

Formación de redes de defensa ciudadana ante el despojo y devastación hídrica y ambiental

En los últimos 10 años se han formado varios frentes de organizaciones sociales y comunitarias para la defensa del derecho al agua y territorio y contra el despojo y devastación ambiental. Todo ello en el marco de la adopción de un modelo extractivista (impulso de la minería y exploración de hidrocarburos) que demanda la privatización del agua, el desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos y la realización de reformas energéticas para afianzar las inversiones privadas, principalmente transnacionales. Es así como se han formado redes más amplias para enfrentar poderes estatales y transnacionales que anteponen intereses económicos y políticos y no consideran el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos. Tales son los casos de la Coalición Mexicana por el Derecho al Agua (COMDA), la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), el Movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos (MAPDER), Red mexicana de afectados por la minería (REMA), Alianza mexicana contra el Fracking, y la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida.

Incidencia legal y litigación en materia de DHAYS y DESCA

Respecto a la incidencia legal, están las iniciativas de una ley ciudadana del agua impulsada por Agua para todos, que articula a la academia, organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales del país. Su papel ha sido propiciar desde el 2012, el diálogo y la participación ciudadana para formular una ley de aguas que incluya las dimensiones del DHAYS y los DESCA. Además de realizar cabildeo con diputados y senadores para impulsar esa iniciativa. Como resultado ha elaborado una propuesta de ley ciudadana que se ha contrapuesto a las dos iniciativas elaboradas por la Comisión Nacional del Agua, denominadas ley Korefeld (2015) y ley Pichardo (2017).



En cuanto a litigación, la Coalición Hábitat Internacional Latinoamericana (HIC-L) junto con Espacio DESC y RADAR han impulsado casos de violación del derecho humano al agua con el fin de hacerlos justiciables y comenzar a avanzar en la aplicación y reparación del daño a los afectados. Al respecto se tiene el caso de la privación del acceso al agua a mujeres de la colonia Tres de Mayo en el estado de Morelos, que ha dejado un precedente importante en materia de judicialización. Después de un largo litigio, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se logró un fallo favorable que define los alcances y contenidos del derecho humano al agua y al saneamiento conforme a los estándares internacionales. Por primera vez se establece la violación del derecho humano al agua si una persona recibe menos de 100 litros de líquido al día; y se define el derecho al saneamiento conforme a lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos.

Asimismo, en el caso de las cuencas de los ríos Atoyac y Salado en Oaxaca se logró un fallo favorable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las autoridades saneen y limpien sus aguas. Esto es un hecho sin precedente en el país, que inició 4 años atrás como un litigio donde los ciudadanos hicieron valer su derecho humano a un medio ambiente sano que se otorga en el artículo cuarto constitucional y en tratados internacionales como los DESCA. Para ello hicieron el uso de instrumentos jurídicos como la nueva Ley de Amparo del 2013, donde es posible el derecho al medio ambiente sano ante tribunales.

Sin embargo, las autoridades de los 3 niveles de gobierno responsables del saneamiento del agua han opuesto resistencia y en el caso de la Comisión Nacional del Agua un recurso de revisión que pretende impugnar el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Esto puede llevar varios meses, aunque se espera que los órganos jurisdiccionales ordenen a las autoridades a cumplir con su obligación de saneamiento.

Cabildeo en instancias internacionales para la observancia del cumplimiento del DHAYs y DESCA

En el marco de la visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los DHAYs, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer en mayo de 2017 el “Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México”, donde se exponen las principales fallas de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano en esta materia.

Las redes y organizaciones que impulsaron la visita del Relator fueron: la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de



Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para tod@s), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

El Relator realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla, Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; así como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En dichos lugares, el Relator pudo ver la precariedad de las condiciones de vida de la población del campo y la ciudad por la falta de cumplimiento de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Asimismo, escuchó directamente a mujeres y hombres cuya vida cotidiana se ve trastocada por esta carencia, también pudo dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales.

Como resultado el Relator realizó un informe por escrito que fue presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en agosto de 2017. En general hizo observaciones en materia de cumplimiento y violación del derecho humano al agua y saneamiento y señaló algunas recomendaciones para el Estado mexicano con el fin de que logre de manera progresiva hacer valer este derecho para la población, sobre todo la más vulnerable por su condición social, étnica y género (ONU, 2017).

Desarrollo de capacidades y participación en tribunales éticos de justicia ambiental como TLA y TPP capítulo México

La importancia de la participación de las organizaciones y movimientos sociales en tribunales éticos (no vinculantes) es por la denuncia de casos de violación de derechos humanos y agravios por parte de actores estatales y privados, sobre todo, cuando los espacios formales de justicia están cerrados o cooptados y los agravios sociales quedan sin reparación.

No obstante, también hay un impacto en un nivel pedagógico donde se establece un ejercicio diferente, a manera de representación teatral para demostrar los agravios más allá de la prueba legal. Los afectados deben organizar sus materiales como videos, documentos, testimonios para armar un expediente de prueba que le permita exponerlo de manera clara en un espacio formal ante jurados de reconocimiento y calidad moral. El veredicto y fallo final sirve como herramienta para su posterior defensa y



argumentación, así como para su difusión en los medios de comunicación y presentación a los actores en contradictorio.

En ese marco es que juegan un papel clave como espacios de justicia alternativa el Tribunal Latinoamericano del Agua y el Tribunal Permanente de los Pueblos que hacen visible a nivel internacional los diferentes casos de agravio en materia de DHAYs y DESCAs en el país por parte del Estado mexicano y las corporaciones privadas. En 2012 la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA, 2012) promovió un juicio contra el Estado por ser causante de la devastación hídrica nacional y violación de derechos humanos ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, como resultado lograron un veredicto favorable (anexo 5.2).

Entre 2012 y 2014 numerosas organizaciones sociales del país lograron promover un proceso con el Tribunal Permanente de los Pueblos en su capítulo México para evidenciar el desvío de poder del Estado para favorecer el interés privado y la consolidación de un modelo neoliberal extractivista que atenta con los derechos humanos y el medio ambiente, entre otras cosas. Como resultado, se logró enjuiciar al Estado mexicano y se tuvo un extenso veredicto, que incluyó un apartado de devastación ambiental e hídrica (TPP, 2014).

Conclusiones

Desde la perspectiva de los movimientos socioambientales hay un agravio estructural por parte del Estado, al privilegiar intereses económicos de actores privados (élites nacionales y transnacionales) en detrimento de los derechos individuales y colectivos de indígenas, campesinos y pobres urbanos y rurales, principalmente. Esto se traduce en un desvío de poder para consolidar un proyecto económico neoliberal (neoextractivismo) que conlleva al despojo de agua y devastación de ecosistemas en territorios campesinos e indígenas, así como al acceso desigual y privatización del agua en los asentamientos humanos urbanos y rurales. Además afecta el disfrute del derecho humano agua y saneamiento (DHAYs) y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) como son a la vida, la alimentación, el medio ambiente sano y la vivienda, entre otros. Finalmente el agravio se relaciona con: la falta de cumplimiento a la ley, la normatividad laxa y permisiva, la gestión centralizada y autoritaria del agua, la in-sustentabilidad en el aprovechamiento del recurso y su disposición final y el limitado acceso a la justicia ambiental e hídrica.



Notas

¹Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad
Universidad Nacional Autónoma de México

Bibliografía

Alimonda, Héctor, (2011), "La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la Ecología Política Latinoamericana", en *La Naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*, Héctor Alimonda (coord.), CLACSO, Buenos Aires, pp. 20-54.

ANAA (2012), *Petitoria de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales al Tribunal Latinoamericano del Agua*, México.

Ávila Patricia (2006). "Movimiento urbano y conflictos por el agua" en Esch Sophy (coord). *La gota de la vida: hacia una gestión sustentable y democrática del agua*. Ediciones Böll. México. Pp 361-375.

Ávila, Patricia (1996), *Escasez de agua en una región indígena de Michoacán*. El Colegio de Michoacán, México, 427p.

Ávila, Patricia (2007), *El manejo del agua en territorios indígenas en México*, Serie del Agua en México, vol. 4, Copyright Banco Mundial, Departamento de México y Colombia, Región de Latinoamérica y el Caribe, México.

Ávila Patricia, (2014), "Water conflicts and human rights in indigenous territories of Latin America", en *Water for The Americas: Challenges & Opportunities*. 3rd Rosenberg Forum Volume, Alberto Garrido, y Shechter Mordechai, Routledge (coords), Nueva York, pp. 177-205.

Barreda Andrés, coord. (2016), *Juicio al Estado mexicano por la violencia estructural causada por el libre comercio*, Editorial Itaca, México.

Ceceña, Ana Esther, (2008), "Autonomía y control de los territorios", en *Hegemonía, emancipaciones y políticas de seguridad en América Latina*, Ana Esther Ceceña (editora). Programa Democracia y Transformación Global, Lima, pp. 91-102

COMDA et al (2017), *Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Agua y Saneamiento*, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, México.

FAN Global (2010), *Manual del activista sobre el derecho al agua y saneamiento: Caja de herramientas prácticas para utilizar un enfoque de incidencia política basado en los derechos humanos con el fin de mejorar el acceso al agua y al saneamiento*, Freshwater Action Network.. Disponible en línea: <https://bit.ly/3pNOpV9>. Consultado 2 febrero 2018.

Harvey, David, (2004) *El nuevo imperialismo*. Cuestiones de Antagonismo 26. Akal. Madrid.



Martínez-Alier, Joan, (2004), "Los conflictos ecológico distributivos y los indicadores de sustentabilidad", en *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, Vol. 1, pp. 21-30.

ONU (2017), *Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México*, Consejo de Derechos Humanos, 2 de agosto. Organización de las Naciones Unidas Asamblea General. A/HRC/36/45/Add.2.

Osorio, Jaime, (2004), *El Estado en el centro de la mundialización: la sociedad civil y el asunto del poder*. Fondo de Cultura Económica, México.

Paz, Fernanda, (2012), "Deterioro y resistencias: conflictos socioambientales en México", en *Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil*, D.V. Tetreault, H. Ochoa García, E. Hernández González (coords.), ITESO, México, 27-47.

Pérez Jiménez Sol (2014), *Territorialidades contenciosas en México: el caso de la minería*, Tesis de maestría en Geografía ambiental, UNAM, México.

Rosas, Octavio (2012), "La lucha legal por la justicia hídrica: México en el Tribunal Latinoamericano del Agua", en *El Cotidiano*, num. 73, mayo-junio, pp.67-79.

Tribunal Latinoamericano del Agua (2012), *Dictamen del caso de México*, Buenos Aires, Argentina.

Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México (2013), *Dictamen de la Preaudiencia de devastación hídrica en México*. Documento inédito, México.



Entre la fuerza y el consenso: Análisis de procesos de diálogo en escenarios mineros de Espinar y Chumbivilcas, región Cusco 2012-2017.

José Antonio Lapa Romero*

Resumen

La presente investigación estudia los procesos de diálogo en Espinar y Chumbivilcas de la región Cusco durante el 2012-2017. Se basa en entrevistas a profundidad a actores claves y revisión/análisis de documentos y publicaciones periodísticas. El estudio demuestra que los procesos de diálogo posconflicto, violento de Espinar (donde opera Glencore) y tenso en Chumbivilcas (donde opera Hudbay y MMG Las Bambas), abre y se desarrolla en un campo político de disputa desigual y tensa donde el Estado despliega estrategias de contención vía compromisos de inversión (lluvia de inversiones) y se muestra parcializado a los intereses del capital minero y contrario a los intereses de los actores locales; resultando el proceso de diálogo ineficaz en la resolución de los conflictos dado que no ha resuelto los problemas que le dieron origen, y la implementación de los acuerdos es lenta, por lo que está lejos de ser un “modelo exitoso” como lo presenta el Estado y el Gobierno. Concluye que posconflicto en el campo político en disputa el Estado que se presenta como mediador, se parcializa y legitima los intereses de las empresas mineras transformando el diálogo en desigual y centrando el diálogo en la generación de estabilidad política y social para el desarrollo del capital minero, no ayudando a resolver los problemas que generaron/originaron los conflictos mineros.

Palabras clave

Fuerza; Consenso; conflicto; Diálogo, Espinar; Chumbivilcas; Cusco.

Introducción

En el Perú desde los 90 las reformas neoliberales promovidas e impuestas desde el Estado han configurado un modelo de acumulación anclado en actividades primarias exportadoras expandidas en diferentes regiones del territorio nacional, y una estructura de poder hegemónico y dominación donde los gremios empresariales (CONFIEP y SNMPE) han cobrado un poder sobre el Estado nunca antes imaginado, y un Estado en relación de dependencia relativa del capital.

Esta expansión geográfica del capital minero –reflejado en el exponencial incremento de la inversión en el sector minero de US\$ 1 500 millones de dólares el año 2000 a US\$



9 723 millones el 2013 – ha incrementado significativamente las concesiones mineras que el 2014 alcanzaron el 20.42 % del territorio del país, y ha ido acompañada de un mayor incremento de los conflictos sociales, y en especial de los conflictos socio-ambientales. En efecto, “dentro de este campo de conflictividad, la mayor cantidad corresponde a conflictos por temática socio ambiental. Así, por ejemplo, mientras que en el 2004 alcanzaban a 4 regiones del país, en el 2005 pasan a ser 7; en 2006, 12; durante el 2007, 15; en el 2008

alcanzaban a 19 regiones; en el 2009 a 23 y en el 2010 aumentó a 24 regiones”¹.

Este modelo se ha desarrollado y ha convivido con el régimen autoritario fujimorista y los regímenes “democráticos” de Toledo, García y Humala. No obstante haberse sucedido tres gobiernos democráticos en más de una década, en determinados momentos y situaciones han tendido a endurecer su fuerza represiva y han utilizado el aparato político y jurídico para legitimar sus acciones apelando a la estabilidad jurídica, al orden público y al Estado de derecho. Así, en los siguientes casos de Espinar (2012-2016) y Chumbivilcas (2016- 2017) se analiza los orígenes y estrategias de los procesos de diálogo.

Problema y Metodología

Fundamentación del problema

En el Perú entre marzo del 2006 y mayo del 2018 han “fallecido en el contexto de conflictos sociales, 279 personas (244 civiles, 35 policías) y resultaron heridas 4816 (3212 civiles, 1599 policías, 5 militares)”. Dado los conflictos permanentes, los criminalizados en Espinar desde el 2012 son alrededor de 3 ciudadanos y en Chumbivilcas más de 50 (luego del 2011, 2012 y 2014). En Espinar Glencore mantiene convenio con la Policía y Hudbay en Chumbivilcas. Mientras el 2012 se creó el Frente Policial de Espinar que tiene bajo jurisdicción las provincias de Canchis, Canas, Espinar y Chumbivilcas, áreas donde desarrollan sus proyectos mineros Glencore y Hudbay; y actualmente en Cotabambas, luego de los conflictos del 2015 y 2016, el Estado viene culminando la construcción de la base de operaciones especiales de la Policial Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Challhuahuacho.

En Espinar, solo para mostrar un dato, hay 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera donde el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo en el cuerpo; mientras que el 2013 el estudio se hizo en la orina de 180 personas, en el marco de los acuerdos de la mesa de diálogo, evidenciando la presencia de arsénico (100 %), Cadmio (90 %), Plomo (100 %),



Manganeso (70 %), Mercurio (88 %) y Talio (100 %), situación ante el cual las comunidades y la sociedad civil han presentado una demanda de cumplimiento el 2015 y está pendiente de sentencia. En tanto, en Chumbivilcas y la zona de operación minera de Hudbay (Chamaca, Livitaca y Velille) se viene mostrando una serie de impactos económicos, ambientales y sociales: encarecimiento del costo de vida de las familias rurales, incremento de los jornales que afectan la economía campesina, afectación a la producción agrícola campesina por estar en una “zona minera”, monetarización de la vida social y económica, impactos en ríos por los vertimientos de aguas residuales-industriales, contaminación por el transporte minero y el polvo de las explosiones de sus operaciones, fragmentación e intensificación de los conflictos en diferentes dimensiones, control social y político, vulneración de derechos y profundización de la pobreza y la desigualdad social.

Este estudio responde a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los orígenes y estrategias del Estado, las empresas mineras y la sociedad en los procesos de diálogo posconflictos del 2012 en la provincia de Espinar donde opera Glencore y el 2016 en la provincia de Chumbivilcas donde opera Hudbay/Las Bambas?

Metodología

El estudio de caso está centrado en describir los procesos de diálogo en la provincia de Espinar donde opera Glencore y la provincia de Chumbivilcas donde opera Hudbay/Las Bambas en el periodo 2006-2017. Se inscribe dentro de la metodología de investigación cualitativa. Está basada en entrevistas a profundidad realizada a líderes/as y dirigentes/as y la revisión/análisis de periódicos de distribución nacional y regional.

Resultados y discusión

Resultados

Conflicto y diálogo: el caso de Espinar

El capital minero de Xstrata Tintaya-Glencore

En Espinar desde el 2006 Xstrata Tintaya², propiedad de la transnacional Xstrata Cooper, explotó el yacimiento minero cuprífero más importante de la Región Cusco y de la provincia de Espinar, ubicada a 4.100 m.s.n.m. Xstrata Cooper, además, era propietaria de proyectos mineros enormes en el Perú como Antapaccay (Espinar-Cusco), Ccorcohuayco (Espinar- Cusco) y las Bambas (Cotabambas-Apurímac). Era parte de las corporaciones internacionales más importantes en el sector minero en el mundo con proyectos de explotación de cobre en Argentina, Australia, Canadá, Chile y Perú. En el Perú ha operado y opera el yacimiento minero de Tintaya bajo convenios de



estabilidad tributaria con el Estado (la nueva explotación minera de Xstrata, que se encuentra a 12 km de Tintaya, es el proyecto Antapaccay que cuenta con convenio de estabilidad tributaria y de recuperación de impuestos), y entre el 2005 y 2009 obtuvo utilidades operativas por U\$D 1,889 millones de dólares³ (U\$D 377 millones anuales), utilidades incomparables con los otros sectores económicos de la provincia. En el 2012 Xstrata fue adquirida por la transnacional capitalista Glencore, quien es propietaria de los yacimientos de Yauliyacu e Isacruz que forman parte de la empresa minera Los Quenuales. Esta empresa capitalista a nivel local, posconflicto, se ha constituido en el poder hegemónico en la provincia de Espinar.

El conflicto de mayo del 2012⁴

Los orígenes del conflicto minero

El origen económico del conflicto minero

Una de las causas centrales del conflicto de mayo del 2012 tiene que ver con el factor económico. Así, el elemento sobre el cual se articuló los intereses de los sectores populares y sus organizaciones desde el 2011 y 2012, y eje de disputa, movilización social y conflicto de mayo del 2012 fue la reformulación del convenio marco que establecía compromisos económicos, sociales y ambientales por parte de la empresa y cristalizaba una serie de intereses de diferentes sectores sociales del área urbana y rural de Espinar (trabajadores, transportistas, mercados, barrios, jóvenes). El convenio marco fue firmado en setiembre del 2003 y establecía que la empresa brindaría oportunidades de empleo eventual hasta un 70% por pobladores de Espinar, contrataría los servicios de transporte local, realizaría compras locales y aportaría “hasta con 3% del total de sus utilidades antes de impuestos obtenidos anualmente”⁵, no obstante la gestión de los fondos para el financiamiento de los proyectos –del 2004 al 2011 se invirtió más 197 millones de soles en más de 500 proyectos y actividades en todo Espinar- que debiese estar bajo control y decisión de un comité de gestión terminó bajo el control y decisión de la Fundación Tintaya (organización creada el 2001), quien lo uso políticamente para reproducir y legitimar su poder hegemónico a nivel provincial, lo que era cuestionado desde las organizaciones y los dirigentes sociales y políticos, y parte de la población.

Es decir, el factor económico es un elemento central que origina el conflicto, articula e identifica los múltiples intereses de los sectores políticos y sociales de la provincia – estructura y atraviesa la estructuración del poder de los sectores populares y le da capacidad de movilización el 2012-, y le da capacidad de disputar reformas al poder



económico minero; que se expresa en los intereses de incrementar el aporte del convenio marco, mayor articulación a la economía minera vía contratación de trabajadores espinarenses, y contratación de empresas proveedoras de bienes y servicios locales. Así, el origen económico del conflicto social tiene que ver con el “no sentirse beneficiados de manera directa por la actividad minera”. La mayoría de sectores sociales en el fondo no quieren que la empresa minera deje de operar, quieren que los “beneficie”, es decir, que se les de oportunidades de empleo o se compre servicios o bienes de las empresas locales. Como lo manifestaba un dirigente transportista, “Pero ¿dónde nace el problema? El problema nace en que no dan oportunidad de trabajo. No estamos en contra de la minería, que trabajen pero que controlen”⁶.

El origen ambiental del conflicto minero

El otro factor que articula y moviliza los intereses del poder popular es el socioambiental. La contaminación y sus efectos ha sido vivida, denunciada y conflictuada de manera permanente, principalmente, por las comunidades del entorno minero, desde la intensificación de la actividad extractiva: Huancane Bajo, Huancane Alto, Tintaya Marquiri y demás comunidades de la microcuenca del Salado y Cañipia. En efecto, la contaminación era y es una realidad extendida entre las comunidades campesinas del entorno minero (sobre sus tierras, pastos, aire, derrames de relaves mineros, muerte de sus animales, y afectación de su salud) antes del conflicto de mayo del 2012, sin embargo, permanentemente la empresa minera, a través de su oficina de relaciones comunitarias y los medios de comunicación que controla o tenía influencia, ha buscado controlar para que no se extienda públicamente clientelizando a los dirigentes comunales y comuneros a través de empleo, deslegitimando cualquier opinión que muestre que la empresa contamina y usando a los comuneros para usar la violencia para que no se haga público los casos de contaminación, y mostrarse fuera del espacio local como una empresa responsable y preocupado por el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

En ese escenario es que se politiza la contaminación minera siendo parte de la articulación de los intereses de los sectores políticos y sociales del área urbana rural y urbana, y de la construcción del poder, y es uno de los elementos centrales para el acuerdo, origen y desarrollo de la movilización popular: abre un campo de lucha política contra la hegemonía, y de consenso entre las fuerzas sociales populares. Así, el 22 de noviembre del 2011 la Municipalidad provincial, basado en el estudio “Monitoreo Ambiental Participativo en la Provincia de Espinar”⁷ promovida por la Vicaría de la



Solidaridad y los testimonios de los comuneros afectados de las comunidades del entorno minero, “Interpone denuncia penal por delitos contra el medio ambiente” ante la Fiscalía, y solicita “sirva aperturar investigación preliminar y en su momento formalizar denuncia”. Es decir, la contaminación y sus efectos en el área rural, generó la articulación y politización de los sectores políticos y sociales contra el poder hegemónico.

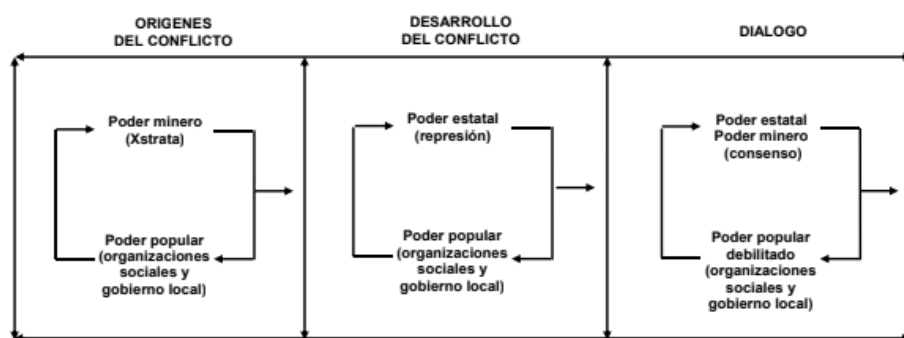


Gráfico 1. Conflicto en Espinar
Fuente: Propia.

Las consecuencias del conflicto

El conflicto y la represión trajeron consecuencias sociopolíticas fundamentales en la hegemonía y la correlación de fuerzas en confrontación durante el conflicto. Por un lado, el gobierno local se debilitó y se evidenciaba una débil legitimidad por parte del Alcalde en la Municipalidad -posconflicto también un sector de regidores intentó vacarlo-, además que se produjo una campaña permanente de deslegitimación de su autoridad desde los medios de comunicación radial (la mayoría de ellos bajo control de la Xstrata Tintaya), dado que se presentaba a la movilización producida como un fracaso por no haber logrado uno de sus objetivos centrales: reformulación del convenio marco. Por otro lado, los dirigentes de algunas de las organizaciones sociales más importantes de Espinar (FUDIE, FUCAE, AUPE, Transportistas) fueron deslegitimados (por los medios radiales), y se encontraban denunciados por el Estado, otros tenían procesos abiertos, y otros tantos tenían temor de asumir cargos dirigenciales. Al final, la empresa minera Xstrata Tintaya fue quien salió fortalecido producto del conflicto y donde el Estado tuvo un papel fundamental en la legitimación de sus intereses y en represión política y legal. Así, el escenario para la recomposición de las fuerzas sociales posconflicto se dibujaba sombrío.

El diálogo y pos diálogo en Espinar

Diálogo de junio 2012 a diciembre 2013

Los inicios de los procesos de diálogo



Luego de los intentos de diálogo antes y durante del conflicto, se abre un campo político de diálogo en Espinar el 21 de junio pos Estado de Emergencia, desmovilización social, liberación de actores políticos (Alcalde y dirigentes), el temor de los dirigentes de las organizaciones sociales de Espinar por ser denunciados y/o detenidos⁸ y la aun presencia policial. No obstante ello, con la expectativa extendida en la opinión pública de los sectores populares de Espinar de encontrar solución a las causas que dieron origen al conflicto minero. Dicha expectativa para el Estado y el gobierno se expresaba en “voluntad de llegar a acuerdos y voluntad de cumplir los acuerdos”, así el Ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal en la instalación de la mesa de diálogo manifestaba que “hagamos que este reto se convierta en modelo, que lo podemos hacer juntos, que un representante del gobierno regional, un representante de los gobiernos provinciales, la máxima autoridad de la provincia de Espinar y un representante del gobierno nacional, pueden trabajar juntos, lograr acuerdos y darle un dinamismo a esta mesa que es lo que se necesita, para finalmente lograr lo que todos queremos, bienestar, paz social, entendimiento. Sigo apostando porque esta mesa de diálogo sea exitosa”⁹. Además, el gobierno se presentaba como mediador de los intereses en contradicción en un escenario de disputa de intereses por medios pacíficos. En dicha instalación no estuvieron presente los representantes de Xstrata Tintaya.

El desarrollo del proceso de diálogo

El diálogo duró de julio del 2012 hasta diciembre del 2013 que se firmaron los acuerdos finales. Este proceso de diálogo estuvo atravesado por cuatro intereses en disputa y momentos de consenso y tensión: 1) desde el Estado, la estrategia de comprometer inversión pública para mantener estabilidad social y política en la provincia; 2) desde la sociedad, mayor inversión estatal, renegociación del convenio marco y atención inmediata a los afectados por la contaminación minera; 3) desde el gobierno local, incrementar la inversión estatal, se renegocie el convenio marco y atención inmediata a los afectados por la contaminación minera; 4) desde Xstrata Tintaya, dialogar para no cambiar nada o casi nada y negar la responsabilidad en la contaminación. El diálogo se dio, por un lado, en un contexto de progresiva reafirmación del poder del capital minero, y creciente debilitamiento y fragmentación de las organizaciones de la sociedad; y por otro lado, la transición de un Estado mediador a un Estado parcializado que legitima los intereses del capital minero.

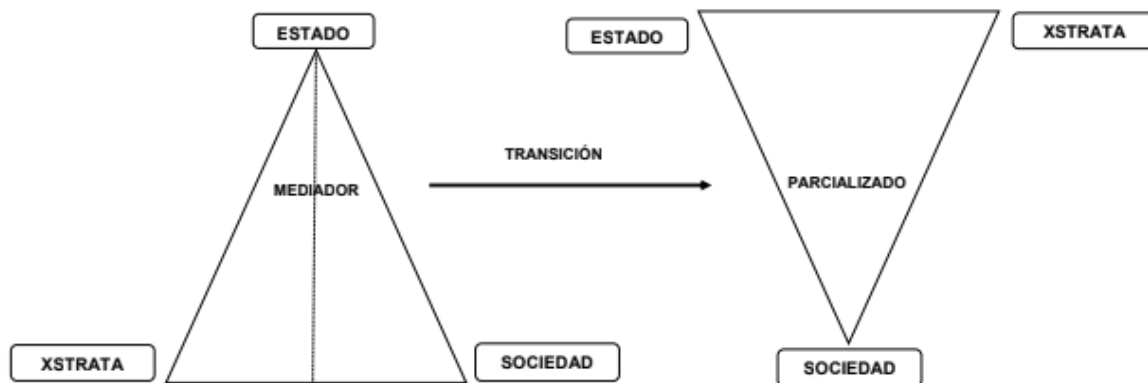


Gráfico 2. La transición del triángulo mediado al triángulo invertido en los procesos de diálogo
Fuente: Propia.

Entonces, el diálogo se desarrolló en un escenario de tensión, disputa y de cercanías de intereses que se fueron mostrando en el desarrollo. Tensión, en los temas sensibles por las responsabilidades de los actores, así por ejemplo, en el tema ambiental “negaban toda la afectación”¹⁰. Cercanías entre el Estado y la empresa minera, que configuró las relaciones de poder en la negociación y que las constituyeron en desiguales de poder, así por ejemplo, es extendida la opinión entre autoridades locales y líderes que “la mina y el Estado eran aliados pues se han hecho notar con todo lo que ha pasado”¹¹.

Los acuerdos en la mesa de diálogo

La mesa de diálogo tuvo una duración de 18 meses de negociación, tensión, consenso y movilización de recursos por parte del gobierno central, gobierno provincial, sociedad local y Xstrata Glencore, que se expresaron en el acta del 2 de diciembre del 2013 que contiene el consenso en términos de acciones de urgencia, el informe de monitoreo sanitario ambiental participativo, los avances del convenio de marco y el plan de acción que incluye el programa de inversiones para la provincia de Espinar¹². Así, como lo expresa un ex participante de la mesa de diálogo, “podríamos decir que algunos acuerdos que si se utilizan bien, se pueden decir que son avances para poder actuar. Por ejemplo, en plan de intervención sanitaria ambiental es un proceso en lo que se debe trabajar, son documentos que han durado en su elaboración bastante meses, y si se utiliza y replantea sus tiempos pueden ser positivos. El plan de inversiones de 1,600.000.000 millones”¹³. Si bien para el gobierno la mesa de diálogo fue “exitoso” y un “modelo de diálogo”, para los actores políticos fue un “acuerdo limitado”¹⁴ y para los dirigentes “se ha hecho lo que se ha podido”¹⁵.



Del diálogo a la implementación de los acuerdos del 2014 al 2016

Para la implementación de los acuerdos se constituyeron dos comités: 1) comité de Gestión y Seguimiento del Plan de Acción Ambiental y; 2) comité de Gestión y Seguimiento del Plan de Inversiones. La implementación de los acuerdos ha estado atravesado por tres factores sociopolíticos centrales: 1) desde la sociedad, debilitamiento y fragmentación de las organizaciones que han reducido su capacidad de exigibilidad y movilización (cambio dirigencial, experiencia y conocimiento de los acuerdos, y desarticulación de las organizaciones); 2) desde el gobierno local provincial, el cambio de gobierno ha reducido su capacidad de exigibilidad; 3) desde Xstrata Glencore, creciente reestructuración y afirmación del poder hegemónico del capital minero. Esta estructuración de las relaciones de poder ha reducido significativamente la capacidad de presión y movilización desde las organizaciones y del gobierno provincial, lo que explicaría la lentitud en la implementación de los acuerdos y la aún no resuelta reformulación del convenio marco y los problemas ambientales.

La revisión del informe del plan operativo 2015 del comité de gestión y seguimiento ambiental sanitario para la provincia de Espinar-CGSAS muestran los siguientes principales avances al 2015: 1) promulgación de la R.M. N° 063-2015-MINAM que ratifica el Plan de Acción sanitario Ambiental para Espinar; 2) aprobación de la R.M. N° 205-2015-SA que aprueba el Plan de Atención de Salud para la provincia de Espinar y se han realizado 3 campañas de salud en Espinar; 3) el MINAGRI formalizó con D.S. N° 003-2015-MINAGRI para financiar obras de riego en Espinar; 4) OEFA instaló una oficina de enlace en Espinar; 5) OEFA suscribió contrato con el Instituto Peruano Nuclear (IPEN) para la realización de la primera parte del estudio de causalidad; 6) el MVCS ha brindado asistencia a la Municipalidad de Espinar para la formulación de 10 perfiles y 7 expedientes técnicos de agua y letrización, contándose con las resoluciones del MEF para la transferencia al gobierno local; 7) CENSOPAS ha preparado propuesta de protocolo de intervención para la vigilancia epidemiológica de las 180 personas afectadas¹⁶. Mientras a nivel de inversión en el tema de inversiones “se puede decir que se ha avanzado, el tramo Condorama a Imata se ha concluido y se está ejecutando el tramo de Yauri a Negromayo por Occoruro y Pallpata, y ahora el tramo San Genaro - Yauri – Negromayo, entiendo que están por ponerlo en licitación. Se podría decir que esos son los avances, y el hospital no tenía expediente técnico y de eso no se sabe ningún avance, en cuanto a saneamiento, electrificación no se tienen ningún avance”¹⁷.



Si bien al 2016 se puede decir que hay algún nivel de avance respecto a la inversión pública, esta se viene caracterizando por ser un proceso formal y con un débil nivel de concreción. Mientras que los avances a nivel de estudios ambientales y salud son lentos y con cuestionamiento en su legitimidad por parte la sociedad. Lo que expresa la débil capacidad de respuesta estatal para afrontar situaciones de posconflicto y posdiálogo que por el contrario requieren respuestas rápidas y eficaces.

También posdiálogo el lento avance en el cumplimiento de los acuerdos han generado la pérdida de legitimidad del diálogo y los acuerdos como forma institucional de resolver las posiciones en disputa. Siendo extendido, por un lado, la opinión en la población que: “comparando con la primera mesa de diálogo que hubo, al 2001, 2002 y 2003. Antes al menos se arrancó y se hizo el convenio marco y se arrancó un dinero para las comunidades se han comprado nuevas tierras, a comparación de ahora no se ve nada, tema salud no hay nada, en el tema ambiental es un saludo a la bandera”¹⁸. Mientras que por otro lado se evalúa que lo acordado aún está en “compromiso” por lo que no ha resuelto los problemas que dieron origen al conflicto, pero que se constituye en un acuerdo: “Están en papeles, se podrían decir que son avances, pero los problemas de fondo se arreglan con otro tipo de gobierno. De nuestra parte no importa que se lleguen a acuerdo limitados pero que sean acuerdos que nos permitan avanzar porque dada la experiencia del 2005 en donde se abrieron mesas y mesas, se trabajó y no hay ningún papel firmado, entonces sobre qué te basas”¹⁹. Por lo que, si bien la mesa de diálogo de Espinar y la implementación de los acuerdos constituyen avances en la resolución de las diferencias por medios pacíficos, también la experiencia está lejos de constituirse en un “modelo exitoso de diálogo” tal como lo han presentado el Estado y la empresa minera.

Estrategias acordadas en los procesos de diálogo, resistencia y negociación

En el caso de Espinar el proceso de diálogo abrió un campo de negociación donde el Estado y la empresa minera han tenido en gran medida el control político del espacio de negociación (tenían la conducción, los equipo técnicos y los recursos económicos) conduciendo al espacio de la negociación a inversión pública y cerrando relativamente el espacio de negociación para renegociar el convenio marco en sus aspecto central (aporte), mientras que el gobierno local y las organizaciones sociales si bien incorporaron en la negociación los problemas centrales que dieron origen al conflicto y la demanda de inversión pública estas no tuvieron el peso político ya en la implementación ante el gobierno central y la empresa, mostrando además que la



negociación no solo es un momento sublime de consenso sino también de poder político y económico y de imposición de quienes tienen mayor poder.

Además, el campo de negociación se desarrolló en un contexto de tensión, reacción diferenciada de los actores y de negociación desigual, no con el objetivo necesariamente de resolver las causas del conflicto, sino de generar estabilidad social y política para el desarrollo del capital minero. Así, es una opinión entre dirigentes y líderes de Espinar que la estrategia del Estado y la empresa fue alargar el proceso de negociación (y la implementación de los acuerdos) y se produjera el cambio de actores locales que generara un escenario favorable sin mayor resistencia y oposición por parte de los actores que participaban en el diálogo y que habían liderado el conflicto: “ellos han buscado alarga el tiempo. Los dos, la empresa y el Estado, han buscado eso y que cambien de autoridad, esa es la estrategia que han utilizado ellos y no ha terminado en nada. Entraron otros actores, entran otras autoridades, otros dirigentes y ellos ya hacen a su manera y no tanto como quedamos. Obviamente por un lado cambio de dirigentes y por otro el cansancio y no hay nada más, pero para la mina y el Estado han hecho algo, han ganado en las comunidades y quedaron bien”²⁰. Estrategia que pareciera que ha sido eficaz a los intereses de la empresa minera y al Estado.

Conflicto y diálogo: El caso de Chumbivilcas

El conflicto del 2016

La provincia de Chumbivilcas en el año 2016 ha vivido diferentes momentos de conflicto y negociación. Al paro de 72 horas de enero del 2016 en Velille y el inicio de las negociaciones con la empresa canadiense Hudbay, le siguieron Quiñota, Chamaca y en noviembre en Chumbivilcas. Ésta, además, se realiza posconflicto en Las Bambas que dejó muertos, heridos y denunciados.

En Chumbivilcas el conflicto del 3 de noviembre del 2016 se dio luego del paro 72 horas por parte de las organizaciones sociales y el gobierno provincial exigiendo la construcción de la carretera del corredor minero por la contaminación ambiental que venía produciendo, la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las empresas mineras MMG-Las Bambas, Hudbay, Anabi y Ares, y la firma de un convenio marco. Ese mismo día se instaló la “Mesa Técnica para el Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas” y se inició un proceso de diálogo que estuvo atravesado por avances, paros, estado de emergencia y reinicios del diálogo que duró hasta marzo del 2017. En un escenario donde la característica central que atraviesa la relación sociedad y minería en Chumbivilcas es de no contradicción sino de convivencia. Así, este consenso en



Chumbivilcas se muestra en los siguientes términos, “las empresas mineras ya están trabajando, son varios años, ya es imposible que la población diga no a la empresa minera al contrario están exigiendo que haya responsabilidad social y ambiental”²¹. O en otros términos que haya una “minería responsable”²².

El conflicto trajo como consecuencia sociopolítica central la constitución de la mesa técnica de la provincia de Chumbivilcas que ha abierto un campo político de diálogo entre Estado, sociedad y empresas mineras.

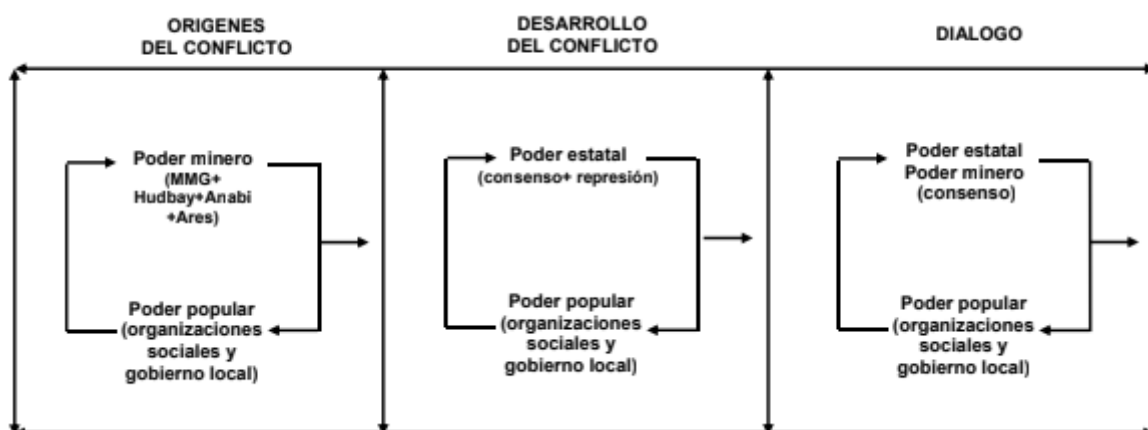


Gráfico 3. Los orígenes y causas del conflicto Chumbivilcas
Fuente: Propia.

El conflicto del 2016

Los orígenes del conflicto minero

El origen ambiental del conflicto minero

Uno de los factores centrales que articula y moviliza los intereses de las fuerzas sociales y políticas de la provincia de Chumbivilcas es el ambiental. La contaminación por los polvos en la carretera del corredor minero y sus efectos fue denunciada y conflictuada de manera permanente, principalmente, por las comunidades del trayecto de la vía afirmada y sus distritos. Así, como nos informa un exfuncionario, “nosotros cuando hacemos el monitoreo

ambiental en los distritos, hemos encontrado alto concentrado de material particulado en donde transportaban los minerales, los convoy que vienen desde Las Bambas hacia Matarani, hemos encontrado que superan los estándares de calidad en 150 %, esto implica que se estaba superando excesivamente los controles de calidad ambiental referidos a los materiales particulados, estamos hablando del PM2, esto hace que informemos a la población. Chumbivilcas empieza a dudar de sus instituciones y se inicie las medidas de lucha en toda la Provincia, para que puedan mitigar las empresas



mineras o el gobierno nacional, dentro de las instituciones competente, para que corregir el tema de la contaminación”²³. Entonces, la contaminación politiza y moviliza a la población y las autoridades locales de Chumbivilcas, entrando en tensión sus intereses con los intereses de las empresas mineras, tal como nos informa una autoridad: “En el caso provincial específicamente es con la Empresa Bambas y Hudbay. Las Bambas porque trasladan todo su mineral y sus insumos desde Apurímac, pasan por Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca, Velille hasta Espinar. Entonces son carros que trasladan mineral en mayor cantidad, entre aproximadamente de 600 a 800 al día, eso genera en el trayecto contaminación por el polvo, entonces todo el distrito de Velille, Chamaca y Ccapacmarca se ha revelado y han dicho hasta cuándo. Que se tiene que hacer un asfaltado definitivo y que por más que echan agua cada hora, por la cantidad de carros sigue afectando. Está afectando a personas, animales y a todas las personas que viven en esa ruta”²⁴. En efecto, la contaminación era y es una realidad extendida principalmente entre las comunidades campesinas y distritos del corredor minero y que vienen afectado los cultivos, el ganado y la salud de la población²⁵. Contaminación, según la empresa, ya mitigada y deslegitimando cualquier opinión sobre contaminación.

Así, la contaminación articula y moviliza los intereses de los sectores políticos y sociales de Chumbivilcas y es uno de los elementos centrales para el acuerdo, origen y desarrollo de la movilización. Abre un campo de lucha política y de consenso entre las fuerzas sociales y políticas.

El origen económico del conflicto minero

La otra causa central del conflicto de noviembre del 2016 es económico. Así, el elemento sobre el cual se articuló los intereses de los sectores sociales y políticos fue la formulación de un convenio marco para establecer compromisos económicos, sociales y ambientales por parte de las empresas MMG-Las Bambas, Hudbay²⁶, Anabi y Ares. Así, era y es parte del consenso que las empresas mineras tienen que aportar al desarrollo de la provincia de Chumbivilcas, dado que la provincia, “por estar en corredor minero que a la fecha no tiene ningún beneficio por la extracción minera, es que plantean realizar un convenio marco”²⁷ y que el “convenio marco es específicamente en el tema de cooperación de las empresas mineras, y también referente al tema laboral y servicios que también las empresas mineras deben cooperar con el desarrollo del distrito, este es el anhelo de la sociedad”²⁸.

Es decir, el factor económico es un elemento central que origina el conflicto, articula, identifica y genera consenso de los múltiples intereses de los sectores políticos y



sociales de la provincia y le da capacidad de disputar sus intereses con las empresas mineras y el Estado. Así, el origen económico del conflicto social tiene que ver con el “no beneficiarse” y la “no cooperación” de la explotación minera de las empresas mineras presentes en Chumbivilcas, es decir, que las empresas puedan “compartir sus ganancias que está basado en la extracción de la tierra Chumbivilcana pienso que podemos terminar con los conflictos”²⁹.

El diálogo y posdiálogo en Chumbivilcas

Diálogo de noviembre 2016 a marzo 2017

Los inicios de los procesos de diálogo

En Chumbivilcas el conflicto abre un campo político de diálogo, consenso, tensión y disputa, y de institucionalización de la resolución de las diferencias por medios pacíficos. Por un lado, con la expectativa extendida en la opinión pública, los dirigentes, líderes y los gobiernos locales que el diálogo resolvería los problemas que dieron origen al conflicto, y, por otro lado, con la expectativa que “las empresas mineras deben cooperar con el desarrollo del distrito, este es el anhelo de la sociedad”³⁰. Mientras que el interés del Estado era contener cualquier posibilidad de inestabilidad política y social, posconflicto Las Bambas, en el corredor minero que se constituye estratégico para los intereses del gobierno y de las empresas capitalistas, así como lo manifiesta una dirigente, “antes que inicie el paro han venido a dialogar y han dicho que no termine como Espinar o Challhuahuacho y que querían instalar una mesa técnica para que se avance estos convenios marcos en la Provincia de Chumbivilcas”³¹, por lo que la negociación vía la mesa técnica se transformaba en una estrategia y mecanismo eficaz para los intereses del Estado.

El desarrollo del proceso de diálogo

El diálogo duró de noviembre del 2016 hasta marzo del 2017 que se firmaron los acuerdos finales. Este proceso de diálogo estuvo atravesado por cuatro intereses en disputa y momentos de consenso y tensión: 1) desde el Estado, la estrategia de comprometer inversión pública para mantener estabilidad social y política en la provincia y en el corredor minero estratégico para el Estado; 2) desde la sociedad, se asfalte la carretera que contamina cultivos, animales y personas y se negocie el convenio marco con la empresas mineras que operan en el territorio³² y; 3) desde el gobierno local³³, incrementar la inversión estatal, se negocie los convenios marco, se revise los EIA de las empresas mineras y se asfalte la carretera que contamina cultivos, animales y personas; 4) desde las empresas mineras, dialogar para no cambiar casi nada, negar la

responsabilidad en la contaminación por la carretera y oponerse a la revisión de los EIA. El diálogo se dio, por un lado, en un contexto de tensión permanente -el 20 de diciembre de declaró Estado de Emergencia por 30 días en la provincia de Chumbivilcas ante un paro iniciado un día antes-, en especial por los temas de revisión de los EIA y los convenios marco; y por otro lado, la transición de un Estado mediador a un Estado parcializado que legitimó los intereses de las empresas mineras.

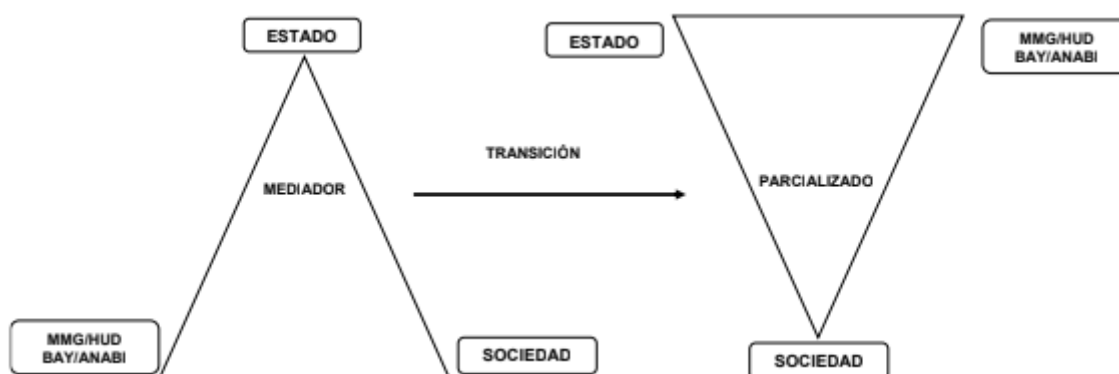


Gráfico 4. La transición del triángulo mediado al triángulo invertido en los procesos de diálogo
Fuente: Propia.

Entonces, el diálogo se desarrolló en un escenario de tensión, y de parcialización de intereses que se fueron mostrando en el desarrollo. Tensión, en los temas sensibles, así por ejemplo, en el tema ambiental, negociación de los convenios marco y la revisión de los EIA, las empresas mineras mostraban su oposición a su revisión. Parcialización entre el Estado y la empresa minera, que configuró las relaciones de poder en la negociación y que las constituyeron en desiguales, así por ejemplo, es extendida la opinión entre los participantes de la mesa técnica, “la mesa técnica se entrampo porque no nos poníamos de acuerdo con las empresas mineras y los técnicos del gobierno nacional siempre entraban en favor de las empresas mineras, no se podía avanzar. Es por ello que se toma la decisión de avanzar con los demás ejes temáticos. En la participación del gobierno nacional ellos decían que no se pueden modificar los EIA, de que ya se han revisado los instrumentos y había un espacio que se tenía para las observaciones y que estos ya habían pasado y que no se puede hacer nada”³⁴.

Los acuerdos en la mesa de diálogo

La mesa de diálogo tuvo una duración de 5 meses de negociación, tensión, consenso y movilización de recursos por parte del gobierno central, gobierno provincial, y sociedad local, que se expresaron en el acta del 17 de marzo denominado “Acta de acuerdos finales del Plan de Inversión para la Priorización de Proyectos para el Desarrollo de la



Provincia de Chumbivilcas entre el Gobierno Nacional con la provincia de Chumbivilcas-Región Cusco". Acordándose principalmente, primero, que: 1) El gobierno nacional priorizará para la provincia de Chumbivilcas una inversión de S/. 2,712'656,313.80 para 145 proyectos (MINAGRI 41, MINAM 7, MINEDU 31, MINEM 3, MINSA 17, MTC 16, MVCS 30; 2) Corredor minero vial Apurímac-Cusco Puente-Sayhua-Ccapacmarca-Muyurcco-Yavi Yavi- Tiendachayoc-desvío Chamaca-Huincho (div. Colquemarca)-Velille-Chaychapampa- Ccollana- Huayllahuilla (Livi- taca)-Hurinsaya_coporaque y Yauri (Espinar), en el mes de abril 2017 se convoca para la contratación del estudio. La inversión en la carretera esta valorizado en S/. 1,000'000,000.00 (Mil Millones); 3) la carretera Quiñota-Llusco-Santo Tomas-Velille-Maranniyoc-Espinar, se avanzará con los estudios y el expediente técnico. La inversión en la vía es de S/. 875'000,000.00. Segundo: Conformar el comité de seguimiento a la matriz final del Plan de Inversión para el Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas-PIDPCH, presidido por la presidencia colegial de la mesa quien convocará a reuniones semestrales para la evaluación del cumplimiento de los acuerdos. Tercero: MINEM se constituirá en el facilitador de los procesos de negociación y firma de convenios marco con las empresas mineras MMG-Las Bambas, Hudbay, ANABI SAC y otro ambiental participativo, los avances del convenio de marco y el plan de acción que incluye el programa de inversiones para la provincia de Espinar³⁵. Dichos acuerdos han generado una extendida expectativa entre la sociedad y las autoridades locales.

Mientras que la negociación con las empresas mineras es un tema pendiente dado que la negociación del convenio marco y la revisión de los EIA no se ha resuelto, y lo que ha dejado abierto un campo de negociación y potencial conflicto

Estrategias acordadas en los procesos de diálogo, resistencia y negociación

En el caso de Chumbivilcas el proceso de diálogo abrió un campo de negociación donde el Estado y la empresa minera han tenido en gran medida el control político del espacio de negociación (tenían la conducción, los equipo técnicos y los recursos económicos) conduciéndolo al espacio de la negociación por inversión pública y cerrando el espacio relativamente de negociación para negociar el convenio marco en sus aspecto central (aporte) y la revisión de los EIA, mientras que el gobierno local y las organizaciones sociales incorporaron en la negociación los problemas centrales que dieron origen al conflicto y la demanda de inversión pública, resolviéndose el diálogo en acuerdos por el tema de inversión. Por lo que los procesos de diálogo están atravesados por procesos



de consenso pero fundamentalmente de poder, poder político y económico, y de imposición de quienes tienen mayor poder.

Además, el campo de negociación se desarrolló en un contexto de tensión, reacción diferenciada de los actores y de negociación desigual, no con el objetivo necesariamente de resolver las causas del conflicto, sino de generar estabilidad social y política para el desarrollo del capital minero. Así, es una opinión entre dirigentes y líderes de Chumbivilcas que la estrategia del Estado y la empresa fluctuó entre el consenso y la fuerza.

Conclusiones

- El proceso de diálogo de Espinar se origina a partir de la violencia/represión estatal, desmovilización social y una reconstitución del poder hegemónico minero. Mostrando en su desarrollo el predominio de estrategias de inversión pública para resolver conflictos, legitimación y parcialización hacia los intereses del capital minero por parte del Estado, una desigualdad de poder entre los participantes en el proceso de diálogo y una empresa minera sin mayor interés en resolver las demandas de la población de Espinar. Luego de 4 años de implementación se evidencia la débil eficacia del Estado para cumplir los acuerdos y desinterés de la empresa por resolver las causas del conflicto por lo que este caso está lejos de constituir un “modelo exitoso” como lo promovió el Estado.
- El proceso de diálogo en Chumbivilcas tiene orígenes en la movilización social y a partir de los efectos de la violencia del caso Las Bambas. Ha predominado la estrategia de inversión pública, legitimación y parcialización hacia el capital minero por parte del Estado, desigualdad de poder en el proceso de diálogo, y empresas mineras pocas interesadas en resolver las causas de los conflictos. Luego de un corto periodo de 2 años se muestra poca eficacia del Estado en cumplir sus compromisos y el desinterés de las empresas por resolver las causas del conflicto.

Notas

¹ Defensoría del Pueblo. Violencia en los conflictos sociales. Informe Defensorial. N° 156. 2012, p. 37.

² El yacimiento minero de Tintaya en su historia de más de 30 años ha pasado de propietarios privados a estatales. En 1952 fue adquirida por la empresa estadounidense Cerro de Pasco Corporation y en 1971 durante el gobierno de Velasco fue estatizada pasando a manos de la empresa pública Minero Perú. El año de 1985 la Empresa Minera Especial Tintaya S.A. inicia su fase de explotación. En los inicios de la



década de los noventa con la implementación de políticas de ajuste estructural, liberalización y privatización es adquirida en 1994 por el consorcio norteamericano Magma Copper Company/Global Magma Ltda., la cual luego cambio de denominación a Magma Tintaya. El año 1996 fue absorbida por el grupo Broken Hill Proprietary (BHP) de Australia y en el 2001 se fusionó con la empresa Billinton P.L.C. Siendo el 2006 que BHP Billinton fue adquirida por Xstrata Copper del grupo minero Xstrata P.L.C.

³ Según el informe de sostenibilidad de Xstrata Tintaya, en el 2009 la empresa tuvo ingresos por ventas totales de U\$D 644.1 millones, en el 2010 U\$D 698 millones, el 2011 U\$D 644 y en el 2012 U\$D 487.25 millones. Consulta: 15 de enero del 2015 <<http://glencoreperupublicaciones.com/publication/1da5a610/>>.

⁴ El conflicto de mayo del 2012, no es el primero ni probablemente el último conflicto que tenga como escenario la provincia de Espinar. En efecto, el 21 de mayo del 1991 se realizó una movilización que terminó con una toma de las instalaciones de la empresa, rehenes y acuerdo con el Estado peruano, el 2003 se realizó una movilización a las instalaciones de la empresa que permitió la reactivación de las negociaciones del convenio marco y el 2005 se tomó la mina –exigiendo el cumplimiento del convenio marco- que abrió un proceso de negociación. Sin embargo, luego de casi 8 años de “tranquilidad” y “paz social” se produce un nuevo conflicto en Espinar que inicia el 21 de Mayo del 2012 a través de una huelga exigiendo el incremento de las utilidades de 3 % a 30 % del convenio marco. Huelga que para algunos sectores de la derecha y los gremios empresariales (CONFIEP y SNMPE) era una huelga “antiminera”, promovido por sectores de “violentistas” que querían desestabilizar el país y el orden democrático. En los próximos días se intensificó y polarizó la movilización popular y se incrementó el número de efectivos policiales a más de tres mil -no obstante los intentos de diálogo-, enfrentado a los sectores movilizados y al Estado. El día 28 el conflicto llega a su máximo nivel de violencia produciéndose la muerte de dos ciudadanos espinarenses. Ese mismo día se declaró el Estado de emergencia, y en los próximos días se termina deteniendo al alcalde de la provincia de Espinar y al presidente del frente de defensa de los intereses de espinar (FUDIE) Herbert Huamán, luego del cual se abrió la mesa de diálogo.

⁵ Convenio Marco por el Desarrollo de la Provincia de Espinar y BHP Billinton Tintaya S.A. Consulta: 24 de marzo de 2017 <<https://bit.ly/38gIYYX>>

⁶ Entrevista 4. Realizada el 23 de febrero del 2017 en la ciudad de Yauli-Espinar. Autor: Autor.



⁷ Estudio: “Monitoreo Ambiental Participativo en la Provincia de Espinar”. Consulta: 20 de febrero de 2017 <<https://bit.ly/3oIGj5U>>

⁸ Esta realidad que se vivía en el escenario de diálogo es expresada por una dirigente, “pero estábamos divididos y los dirigentes de miedo. Como habían detenido, ya no querían saber nada los dirigentes, estaban atemorizados y se estaban escondiendo”. Entrevista 2: Realizada el 23 de febrero de 2012 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: autor.

⁹ MINISTERIO DEL AMBIENTE. Se conforma Mesa de Diálogo en Espinar-Cusco. Publicado el 13 de julio de 2012. Consulta: 16 de marzo de 2017 <<https://bit.ly/2LkNexA>>

¹⁰ Entrevista 1: Realizada el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: Autor.

¹¹ Entrevista 3: Realizada el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: Autor.

¹² Acta final de la presidencia colegiada de la mesa de diálogo de Espinar. 2 de diciembre de 2013. Consulta: 20 de marzo de 2017 <<https://bit.ly/3hWJ5w5>>

¹³ Entrevista 1: Realizada el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: Autor.

¹⁴ Entrevista 1: Realizada el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: Autor.

¹⁵ Entrevista 3: Realizada el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: Autor.

¹⁶ Informe del Plan Operativo 2015-Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario para la Provincia de Espinar-CGSAS. 31 de marzo de 2016. P. 34. Consulta: 20 de marzo de 2017 <<https://bit.ly/2L7mHno>>

¹⁷ Entrevista 1: Realizada el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: Autor.

¹⁸ Entrevista 3: Realizada el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: Autor.

¹⁹ Entrevista 1: Realizada el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: Autor.

²⁰ Entrevista 3: Realizada el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: Autor.

²¹ Entrevista 6. Realizado el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.



²² Entrevista 8. Realizado el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

²³ Entrevista 5. Realizado el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

²⁴ Entrevista 6. Realizado el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

²⁵ No obstante los efectos visibles e inmediatos que movilizaron y articularon al gobierno local y la sociedad de Chumbivilcas, aun los efectos de la minería en el corto y largo sobre la provincia no se ha extendido como parte de la problemática, dado que la capital del distrito no sufre los efectos directos de la contaminación. “Pero aquí en Chumbivilcas como que eso está un poquito lejano, pero de todas maneras son comunidades, por ejemplo solo es esta ruta hablamos de carretera son varias las comunidades que están por ejemplo Tuntuma, Vininquiri, están las comunidades de Colquemarca y Ccapacmarca y en el lugar donde están operando siempre va haber contaminación, cuando hablo de Velille habló de Alcca Victoria toda esa cuenca de Velille va a ser contaminada y la cuenca de Santo Tomás desde Ares, por Huanzo, no siempre la capital de la provincia sino las comunidades y los productos, y siempre vamos a ser afectados”.

Entrevista 6. Realizado el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

²⁶ Siendo parte también de la realidad que se vive en las comunidades de los distritos donde viene operando las empresas mineras desorganización y fragmentación. Así, nos manifiesta un dirigente, “Ellas también están desorganizadas, en Uchucarco y otras comunidades, hay problemas entre comuneros porque hay comuneros que están de acuerdo con la empresa minera y otro no”. Entrevista 8: Realizada el 22 de febrero en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

²⁷ Entrevista 5. Realizado el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

²⁸ Entrevista 6. Realizado el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

²⁹ Entrevista 6. Realizado el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

³⁰ Entrevista 6. Realizado el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

³¹ Entrevista 7. Realizado el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.



³² Las posiciones desde las organizaciones sociales no estuvieron exentas de tensiones internas, tal como nos manifiesta un dirigente de Chumbivilcas, “nosotros los dirigentes no siempre coordinamos, tenemos diferencias. Por diferencias políticas, porque el frente tiene otra posición y la Liga también. La posición del frente es que sí o sí se cumpla los acuerdos al pie de la letra y no siempre podemos exigir que sea así, creo que debemos ser un poco flexibles y poder negociar. Que tal vez no sea al 100%, que podría ser al 60 o 70%. Nosotros tenemos reuniones con presidentes de otras comunidades y opinan lo mismo”. Entrevista 8. Realizada el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

³³ Los intereses de los gobiernos locales en el proceso de negociación se muestran en lo que nos manifiesta una autoridad, “la municipalidad provincial y conjuntamente con los acreditados que son los alcaldes distritales, que tienen que ser atendidos las demandas, los proyectos que ellos están encaminando en la Provincia por parte del gobierno central y por otro que las empresas mineras tienen que resolver el problema del impacto ambiental de la carretera específicamente Las Bambas, del asfalto de la carretera que exige la obligación por la contaminación, y que coopere que den su aporte estas empresas mineras porque están operando en el ámbito territorial de Chumbi<as en algunos casos están en la Provincia y en otros casos están utilizando las vías y que cumplan con su responsabilidad social y ambiental. Entrevista 6: realizada el 22 de febrero de 2017 en la ciudad de Chumbivilcas. Autor: Autor.

³⁴ Entrevista 5: Realizada el 23 de febrero de 2017 en la ciudad de Espinar. Entrevistador: Autor.

³⁵ Acta final de la presidencia colegiada de la mesa de diálogo de Espinar. 2 de diciembre de 2013. Consulta: 20 de marzo de 2017 <<https://bit.ly/35dXzCl>>

Bibliografía

Defensoría del Pueblo

2012 Violencia en los conflictos sociales. Informe Defensorial N° 156. Lima. 2007 Informe extraordinario sobre conflictos sociales en el Perú. Lima.

Errejón, Iñigo.

2011 La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

ONG COOPERACIÓN



2014 Sexto Informe sobre concesiones mineras en el Perú de octubre del 2014. Lima.

Consulta: 15 de enero de 2015.

Ministerio de Energía y Minas 2014 Perú 2014: Anuario Minero.

Consulta: 15 de enero de 2015. <<https://bit.ly/2L7niWa>>



Educação, trabalho e meio ambiente: A experiência do lampear no fortalecimento da universidade e da sociedade para renovadas criações históricas

Fernando Bomfim Mariana¹

Resumo

Este trabalho objetiva apresentar as dinâmicas acadêmicas do Laboratório de Movimento Sociais e Educação Popular (LAMPEAR) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Brasil, realizadas entre os anos de 2012 a 2018. A problemática central refere-se às ações de projetos de extensão universitária relacionadas ao vínculo entre a Universidade e os movimentos sociais e populações sertanejas, notadamente através da abordagem de concepções plurais de trabalho, educação, cidadania e meio ambiente que se afastam da visão urbanocêntrica da sociedade. As metodologias dialógicas e coletivas embasaram tais ações, nas quais as rodas de conversas e os círculos de estudo possibilitaram o ecoar de múltiplas vozes dos sujeitos envolvidos. Os resultados das dinâmicas do LAMPEAR envolveram harmonização de saberes acadêmicos e saberes populares na construção de um conhecimento voltado para a emancipação social, desde o fortalecimento da economia popular comunitária e de formas alternativas de organização do trabalho até novos protagonismos sociais de arte e cultura popular. Nesse sentido, a troca de experiências entre os atores de tais projetos contribuem para o apontamento de aportes epistemológicos renovados para outras criações históricas. As conclusões advindas dos projetos executados em torno do Laboratório versam sobre a indissociabilidade entre Universidade e Sociedade, o papel dos movimentos sociais enquanto resistência às ofensivas de empreendimentos do capital nas regiões do semiárido brasileiro, a importância da educação popular no contexto da recusa à destruição ambiental, a possibilidade de novas relações humanas em civilizações vindouras, dentre outras.

Palavras chave

Trabalho; Meio ambiente; Movimentos sociais; Educação popular; Universidade.

Introdução

O Laboratório Internacional de Movimentos Sociais e Educação Popular (LAMPEAR) foi um coletivo interinstitucional sediado no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), entre os anos de 2010 e



2018. O LAMPEAR procurou articular iniciativas anticapitalistas voltadas para a emancipação social, estimulando a busca pela condição humana maravilhosa no sertão e em outras localidades do planeta. Ao mesmo tempo, procurou denunciar a miséria da vida cotidiana em que nos encontramos submetidos, ora devido às ingerências de instituições totalitárias contemporâneas (em especial as grandes empresas transnacionais e o Estado), ora pela falta de iniciativa e/ou desorganização popular em tentar romper com as amarras de escravidão social, política, econômica e cultural da atualidade.

Ao reconhecer o papel fundamental dos movimentos sociais para as atuais concepções de educação popular, o LAMPEAR se entrelaçou com diversos segmentos da sociedade civil organizada para construir conhecimentos/habilidades fundamentais para a autonomia social a partir de renovadas formas de relação humana. Nesse sentido, o LAMPEAR consolidou durante nove anos consecutivos uma série de projetos de extensão universitária que, ao lado de práticas de ensino e pesquisa na UFRN, imprimiram novas perspectivas para a relação entre universidade e sociedade— em especial nas relações advindas entre educação, trabalho e meio ambiente.

As ações de extensão universitária do LAMPEAR estavam circunscritas a três projetos centrais: a) Lampear na comunidade; b) AFESOL – Articulação e Fortalecimentos de Empreendimentos Econômicos Solidários; c) Grupo de Arte e Cultura “Travessia...”. Tais projetos representam, ainda hoje, uma referência para a região do semiárido brasileiro no que diz respeito a abordagens diferenciadas nas relações entre Universidade e sociedade, uma vez que tais projetos estiveram focados no desenvolvimento de temáticas fundamentais para efetivas respostas de problemas profundos diagnosticados no contexto do sertão brasileiro – em especial problemáticas derivadas das temáticas da educação, do trabalho e do meio ambiente.

Fundamentação e metodologia

A metodologia do LAMPEAR esteve fundamentada no pensamento crítico de Paulo Freire (1983), em que a dialogicidade no espaço público de discussão é o foco da educação popular. Ainda nas concepções de educação popular de Paulo Freire, todas as ações do projeto estiveram em concordância com a realidade das populações sertanejas participantes das intervenções.

O registro fotográfico e audiovisual das atividades foi realizado de forma rotativa por toda equipe, a fim de propiciar maior pluralidade de olhares e subjetividades acerca das temáticas pesquisadas.



Ressaltamos, ainda, que todas as atividades estiveram orientadas pelas metodologias de trabalho de campo sugeridas por Dulce Whitaker (2002), tais como a pesquisa-ação e os diários de campo artísticos confeccionados pela equipe, e outros elementos da área de conhecimento da sociologia rural.

Para uma melhor compreensão das ações em que estiveram ancorados os projetos de extensão do LAMPEAR, acredito que seja imprescindível discorrer sobre alguns princípios teórico-filosóficos debatidos juntos a este coletivo acadêmico nos últimos anos, uma vez que tais estudos indicam epistemologias emancipatórias que facilitam a compreensão do mundo ao nosso redor e das possibilidades práticas de mobilizações sociais voltadas para a liberdade humana:

O conceito de autonomia na obra de Castoriadis

O conceito de autonomia utilizado na obra de Cornelius Castoriadis subsidia a investigação acerca das contradições entre práticas autônomas e heterônomas, além de elucidar a dinâmica de auto-institucionalidade que caracteriza os movimentos autônomos.

No nível do indivíduo, Castoriadis se apropria da expressão freudiana *Wo Es war, soll Ich werden* (Onde era o *Id*, será o *Ego*) para exemplificar, psicanaliticamente, a aproximação do *Ego* com a esfera consciente; o *Id* com o inconsciente em geral.

“Ego, consciência e vontade, deve tomar o lugar das forças obscuras, que, em mim, dominam, agem por mim. (...) O Ego deve tomar o lugar do Id – isso não pode significar nem a supressão das pulsões, nem a eliminação ou a reabsorção do inconsciente. Trata-se de tomar seu lugar na qualidade de instância de decisão” (Castoriadis, 1982, p. 125).

Não podemos negar os desejos e necessidades advindos do mundo social e introjetados em nossa esfera inconsciente. Para Castoriadis, a autonomia não é a eliminação do discurso do Outro, mas “a instauração de uma outra relação entre o discurso do Outro e o discurso do sujeito”. (1982, p. 126)

Nesse sentido, a consciência na tomada de decisão em assembleias ou qualquer outro mecanismo de gestão democrática é condição primeira para a inexistência de relações totalitárias criadas por determinada institucionalidade sobre um indivíduo.

A dimensão social da autonomia encontra-se justamente no fato da vida em sociedade, ou seja, na contínua presença do discurso do Outro em nosso ser individual. O discurso do Outro assume formas variadas, podendo se materializar nos mecanismos de



mercado, em programas televisivos, utilização de celulares e computadores, na vigilância, nas prisões.

Ao elaborar tal discurso em nossa ação inter-subjetiva, deslocamos a questão da autonomia do nosso plano individual para uma empreitada coletiva. Essa ação inter-subjetiva representa nossa existência social e histórica. Para o autor, o social-histórico “é a união e a tensão da sociedade instituinte e da sociedade instituída, da história feita e da história se fazendo” (CASTORIADIS, 1982, p. 131). As necessidades humanas dentro da sociedade capitalista atuam justamente na situação de tensão entre a instituição imaginária de novos e ilimitados desejos (em grande parte materializados em novos serviços e ilimitadas mercadorias) e os anseios conscientemente advindos do indivíduo.

Na direção inversa da autonomização das instituições (jurídicas e não jurídicas) perante o indivíduo, ou seja, da perda do controle do ser humano sobre os meios e os fins de qualquer relação instituída na sociedade, Castoriadis propõe no plano político a autogestão das instituições e a conseqüente abolição de relações hierárquicas. Para o autor, uma sociedade autogerida é uma sociedade onde todas as decisões são tomadas pela coletividade. Na medida em que se expande, as estruturas de poder na sociedade autogerida são ocupadas por delegados eleitos diretamente na sua comunidade ou local de trabalho, com mandatos revogáveis e rotativos, em substituição a qualquer forma de direção hierarquizada, burocratizada ou especializada que, inevitavelmente, escapam ao poder da coletividade.

Toda decisão coletiva é tomada com conhecimento de causa. O monopólio de acesso a informações e o ritmo desigual de construção de conhecimentos comuns para a decisão coletiva resulta na hierarquia de comando. Na sociedade hierárquica, porém, o saber e a competência

especializados permitem a técnicos e/ou administradores tomarem decisões coletivas, mesmo causando conflitos perpétuos ou desperdícios gigantescos.

Numa sociedade autogerida, a incompatibilidade com uma hierarquia de direção não é menor do que a incompatibilidade com a hierarquia de salários e rendimentos, uma vez que não existem critérios objetivos para fundar tal desigualdade.

No trabalho produtivo, a substituição da motivação econômica pela motivação social desabrocha a invenção, a criatividade e a motivação para a realização da atividade,



ainda mais quando o fruto do trabalho se demonstra compatível com necessidades coletivas reais na sociedade.

Estado Amplo e Estado Restrito nas obras de João Bernardo e Lúcia Bruno

No processo de expansão do mundo da mercadoria, o Mercado capitalista internacionalizado conta com um de seus tradicionais aliados históricos: o Estado. Atualmente, a íntima relação entre Mercado e Estado tem suscitado interessantes debates a respeito da soberania do Estado-nação em relação ao Mercado global. Em *Transnacionalização do capital e fragmentação dos trabalhadores*, João Bernardo oferece um interessante recorte do perfil do Estado capitalista, colaborando para a continuidade da análise deste tema:

(...) chamo Estado Restrito ao conjunto das instituições que compõe o governo, o parlamento e os tribunais, ou seja, aos poderes executivo, legislativo e judiciário. (...) O que me leva a admitir que exista no aparelho global do Estado outra esfera, mais ampla? Em tudo o que diz respeito à organização interna das empresas, os patrões e os gestores escolhem os sistemas de administração e organizam a força de trabalho, o que constitui uma forma de poder legislativo. Além disso, eles estabelecem as hierarquias, definindo a amplitude das decisões possíveis de ser tomadas em cada escalão, e impõe as normas de trabalho, o que constitui uma forma de poder executivo. Finalmente, os proprietários das empresas ou os seus administradores avaliam o desempenho de cada trabalhador, concedendo prêmios de produtividade ou impondo multas e outros tipos de punição, inclusive a demissão, o que constitui uma forma de poder judiciário. E eles fazem-no numa esfera que é em grande medida alheia aos condicionalismos impostos pelo Estado Restrito. O governo, o parlamento e os tribunais reconhecem aos proprietários privados e aos gestores uma enorme latitude na administração, na condução e na punição da força de trabalho, ou seja, reconhecem-lhe uma verdadeira soberania. E qualquer exercício de um poder soberano é, por si só, uma atividade política. Ora, se a organização da economia é ela própria, diretamente, um poder político, então o seu âmbito de ação é muitíssimo vasto. Por isso lhe chamo Estado Amplo (...). Na forma como o concebo, o Estado capitalista é sempre resultado de uma conjugação entre o Estado Amplo e o Estado Restrito. (Bernardo, 2000, p. 11-12)

No início do processo de fortalecimento das empresas transnacionais, o Estado Restrito providenciara toda a infra-estrutura necessária para a viabilização da implantação e desenvolvimento de determinadas forças produtivas. Nessa fase inicial, o Estado Amplo não poderia arcar sozinho com as despesas básicas para sua expansão. A partir da cooptação de partes do Estado Restrito, as empresas estruturam um poder para além das portas da unidade de produção. Em *Reestruturação capitalista e Estado Nacional*



(1999), Lúcia Bruno discorre sobre as instituições do Estado Amplo, citando essencialmente: Council on Foreign Relations (CFR), Business Council (BC), Political and Economical Planning (PEP), Committee for Economic Development (CED), CEPES (Comitê Europeu para o Progresso Econômico e Social). Outras instituições organizadas nesta mesma perspectiva, tais como a Organização Mundial do Comércio (OMC) que, a partir de janeiro de 1995, substituiu o GATT – Acordo Geral de Tarifas e Comércio. A OMC, juntamente com outros organismos, como a CCI (Câmara de Comércio Internacional), a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) e o FMI (Fundo Monetário Internacional), articula cerca de 500 megaempresas que dominam 2/3 do comércio no mundo.

Nessa conjuntura mundial, e com o auxílio de um sindicalismo atrelado a co-gestões nas empresas em busca de melhores resultados na produtividade, o Estado Amplo vem se sobrepondo ao Estado Restrito, internacionalizando suas esferas de poder e construindo os processos de democracia e globalização da economia. Obviamente que as partes do Estado Restrito aberto a participação popular nos atuais regimes democráticos restringem-se a esferas demasiadamente dependentes daquelas já cooptadas pelo Estado Amplo. As privatizações, dentro desse prisma, dinamizam a fluência das

Relações económicas internacionais, ultrapassando possíveis obstáculos encontrados no âmbito do Estado Restrito.

Zonas autônomas temporárias

O conceito elaborado por Hakim Bey de *zona autónoma temporária* auxilia na reflexão sobre as ações diretas possíveis no mundo contemporâneo. Para o autor, “um levante representa uma possibilidade muito mais interessante, do ponto de vista de uma psicologia da libertação, do que as bem-sucedidas revoluções burguesas, comunistas, fascistas, etc.” (BEY, 2001, p.21).

Tal raciocínio procura questionar o sucesso de revoluções permanentes e, ao mesmo tempo, valorizar os momentos insurgentes temporários autônomos como uma das mais valiosas experiências pedagógicas. Nesses momentos de levante, a auto-institucionalidade é vivida e apreendida no cotidiano, o que dificilmente ocorre ao se materializar uma certa *ordem revolucionária*.

Segundo a obra de Bey, três pressupostos básicos são necessários para a efetivação dinâmica de uma zona autônoma. Inicialmente, a substituição da família nuclear por



outros coletivos de convivência cotidiana, tais como bandos, clãs, confrarias, república de crianças, etc.

Outra característica fundamental é a possibilidade de tempos e espaços livres festivos. É no tempo-espaço livre que emerge o potencial de criação do indivíduo e a respectiva construção e fortalecimento da individualidade dentro do coletivo. A importância do sentimento de festividade no tempo-espaço livre invoca “Fourier e seu conceito dos sentidos como base de transformação social– *toque do cio* e *gastrosofia*, e seu louvor às negligenciadas implicações do olfato e do paladar”². Na essência da festa, um grupo de seres humanos, frente a frente, “coloca seus esforços em sinergia para realizar desejos mútuos, seja por boa comida ou alegria, por dança, conversa, pelas artes da vida. Talvez até mesmo por prazer erótico ou para criar uma obra de arte comunal, ou para alcançar o arruamento do êxtase. Em suma, uma *união de únicos* – como coloca Stirner – em sua forma mais simples, ou então, nos termos de Kropotkin, um básico impulso biológico de *ajuda mútua*”³.

Finalmente, o terceiro momento para uma zona autônoma temporária: o conceito de nomadismo psíquico. A partir da padronização global dos ambientes de sociabilidade humana que “tende a ofuscar toda a diversidade cultural e toda a individualidade para que todo lugar seja igual ao outro”, o autor ressalta o valor do desejo e curiosidade por outros tempos-espaços psíquicos. Descreve estes momentos não apenas através do percurso espacial físico, derivado de movimentações de trabalhadores imigrantes, refugiados, sem-teto, turistas, mas também na possibilidade de utilização consciente de recursos audiovisuais, de telecomunicações, livros, ou mesmo ainda mudança de emprego, *estilo de vida*, religião, dieta, etc.⁴

Podemos citar alguns exemplos de práticas históricas nos quais o autor embasou sua teoria sobre as zonas autônomas temporárias. O soviete de Munique (ou a “República do Conselho”), de 1919, apresentava características anarquistas que possibilitaram o livre exercício de um poder autônomo comunitário, assim como a insurreição de Kronstadt (1921), contrária ao governo bolchevique, e as movimentações populares durante a Revolução Espanhola (1936-39).

As comunas revolucionárias urbanas na Europa, como a Comuna de Paris, também capitularam os principais aspectos de uma zona autônoma. O grau de autonomia conquistado pela população, mesmo temporariamente, repercutiu “durante e depois destes anos”, possibilitando aos anarquistas adquirir “a prática do nomadismo revolucionário, perambulando de revolta em revolta, procurando manter viva em si



mesmos a intensidade do espírito que eles experimentaram no momento do levante”⁵, ou seja, sempre ocupar uma localidade geográfica passível do desencadeamento de uma zona autônoma.

Outras experiências de menores proporções também subsidiaram a teoria investigada, tais como a Colônia Roanoke e a Colônia Libertatia, ambas criadas por colonizadores durante a época das grandes navegações e da invasão da América nos séculos XVI e XVII. O elemento central destas experiências foi a sabotagem dos planos de invasão dos territórios americanos, a deserção em massa dos colonizadores, e a rendição aos indígenas, resultando na união entre os povos. Ainda nessa perspectiva, o autor descreve os assentamentos ou comunidades estabelecidas à margem da lei, proliferadas basicamente durante o século XVIII, articuladas por piratas e corsários através de “rede de informações” globais (formada por ilhas ou esconderijos remotos onde os navios trocavam os resultados das pilhagens).

Temporariamente, a zona autônoma é uma zona liberta. Liberta precária e provisoriamente das institucionalidades heterônomas do sistema capitalista. Mesmo não se conjecturando como excludente ao sistema, esta se contrapõe ao heterodeterminado, possibilitando no conflito o desabrochar das contradições e suas possíveis superações.

A Internacional Situacionista

A Internacional Situacionista (I.S.) foi um movimento internacionalista surgido na década de 50, organizado a partir da crítica ao espetáculo de massas, à arte e ao urbanismo. As estratégias heterodoxas da I.S. – fundadas no escândalo, subversão e sabotagem da arte contemporânea – possui no movimento imediato em prol da revolução uma estreita relação com a valorização de levantes enquanto modo de contestação da mercadorização da vida humana na dinâmica de desenvolvimento do capitalismo.

A crítica situacionista denuncia a técnica de controle das massas – desenvolvidas a partir do Estado de Bem Estar Social –, a internacionalização do capital via multinacionais e o deslocamento da propaganda política para a publicidade comercial.⁶

A postura política da I.S. se configurava, antes de tudo, como não doutrinária. Para os situacionistas, o *situacionismo* é um vocábulo sem sentido, construído abusivamente por anti-situacionistas para forjar uma doutrina de interpretação. Execrava rótulos ideológicos, porém orientava-se pelo fim do Estado e da sociedade do espetáculo, e a



favor dos Conselhos Operários, da autogestão generalizada e da organização de ocupações. Além disso, a I.S. criticava qualquer forma de mediação, inclusive a artística.

A forma de atuação dos membros da I.S. era a situação construída, traduzida em diversos momentos pela ação performática. Tal situação, construída pela organização coletiva, carregava intrinsecamente um componente pedagógico através de seu jogo de acontecimentos. No espaço dos lazeres, a contribuição da I.S., para este estudo, está na sua crítica ao controle do tempo livre dos seres humanos e à transformação da arte em mercadoria.

A formulação teórica do *urbanismo unitário*, onde a cidade reservaria um papel central para a participação ativa e encontro dos indivíduos num ambiente criativo e lúdico, também possui grande relevância para o tema. Tal perspectiva procura questionar o funcionalismo da cidade ou, mais além, a caracterização da cidade enquanto fábrica. Ao mesmo tempo, apresenta o conceito de sobretrabalho, isto é, o tempo de vida destinado a atividades complementares ao trabalho heterônomo – tais como tempo de transporte.

Utilizamos alguns desses fundamentos no decorrer das análises a respeito das potencialidades dos movimentos sociais na transformação do modelo organizacional do capitalismo centrado no urbanismo. Além disso, procuro subsidiar interpretações sobre as possibilidades de reversão do processo de êxodo rural na atual conjuntura de precarização da vida e do trabalho na cidade e no campo.

Finalmente, a importância do exercício da deriva, proposto pela I.S., nos ajudou a compreender aspectos importantes da vida cotidiana nos assentamentos (e seu respectivo compromisso com modificações neste cotidiano realizadas conscientemente). O exercício da deriva permite entrar em contato com situações diversas nos cotidianos investigados, ultrapassando as barreiras de um olhar premeditado sobre determinado assunto.

Resultados e discussões

A população da região do sertão do Seridó em que se desenvolveram as ações do LAMPEAR está localizada nas zonas rurais em áreas onde há um contato direto com o meio ambiente natural, e que hoje se encontra ameaçado em diversos parâmetros devido a exploração de seus recursos. A falta de informação sobre a escassez e a renovação desses recursos pode afetar irreversivelmente as condições do ambiente, seja se tratando de qualidade e fertilidade dos solos, seja da diversidade de espécies



biológicas, animais e vegetais ou dos minerais encontrados. Por isso há necessidades primordiais para a introdução da educação ambiental nas comunidades rurais, visando o fortalecimento do conhecimento agroecológico.

Hoje a “questão” ambiental é levantada devido a observância dada ao crescimento populacional e seu consumo, e que voltados ao capitalismo traz preocupantes índices de desmatamento, extinções de espécies em massa, desigualdade social, fome, miséria entre outros. A degradação da natureza não é apenas um fator econômico ou ambiental, mas também social, pois este último é o meio que interliga capital e natureza, e é a força motriz dos impactos causados direta ou indiretamente – uma vez que a sociedade precisa de sustento, de trabalho, e estes na maioria das vezes vêm da natureza. Em síntese, o homem depende do capital, e usa a natureza como produto de troca e venda, para obter seu sustento e as indústrias seu lucro através da produção providas das matérias-primas.

A construção e a sistematização de saberes realizados a partir dos projetos do LAMPEAR privilegiaram conteúdos em ética, responsabilidade social, controle social e participação, empreendedorismo social, elaboração e gestão de projetos, resolução dialogada de conflitos, comércio justo, qualidade e meio ambiente, relações humanas no trabalho e autogestão e economia solidária. O intuito foi conduzir o grupo produtivo à reflexão coletiva em torno de processos de exclusão social, inerentes ao sistema capitalista, ao tempo em que novas possibilidades são traçadas a partir do diálogo entre formandos e formadores. Trata-se de contribuir para a solução de situações-problemas, ou seja, para que o grupo possa decodificá-las e encontrar caminhos próprios, mediados pelo conhecimento acadêmico.

As ações de formação sociopolítica e técnica se articularam sob dez eixos principais: 1. Agricultura e a revolução verde; 2. Alimentos transgênicos e a vulnerabilidade do pequeno agricultor contemporâneo; 3. Mudanças no mundo do trabalho; 4. Cooperativismo e alternativas para a crise do trabalho; 5. O movimento cooperativista – os pioneiros; 6. A Aliança Cooperativa Internacional (A.C.I.); 7. Experiências cooperativas no mundo contemporâneo e a economia popular solidária; 8. Autonomia e cooperativismo: o problema dos gestores profissionais; 9. Autonomia e cooperativismo: proposta de autogestão; 10. Meio ambiente, trabalho e educação.

Além dos dez eixos principais das ações dos projetos de extensão universitária, destacamos algumas propostas desenvolvidas naquele contexto visando inovação tecnológica e/ou adaptada:



Manejo florestal - para conservação das espécies nativas da caatinga Seridoense, tendo em vista a grande degradação causada pelas atividades econômicas da região como: cerâmicas, pastagens, panificação, entre outras atividades. A implantação desta técnica visa trazer benefícios tanto para o meio ambiente, utilizando seus recursos de maneira sustentável, dando assim, espaço de tempo para a regeneração e rotatividade das espécies locais, como é benéfica também para a economia da região trazendo lucros sem a necessidade de degradar o meio ambiente natural, já tão degradado na região.

Calagem - técnica utilizada para a fertilização de solos ácidos, sendo bastante necessária na região onde há presença de neossolos e de latossolos, como por exemplo. Onde essa região tem graves problemas de lixiviamento e erosão dos mesmos devido à degradação exercida pelas ações antrópicas.

Reflorestamento - técnica utilizada para a reconstrução das florestas nativas, sendo reintroduzidas espécies vegetais nativas para tal fim, enriquecendo as florestas de caatinga existentes na região bastante degradada.

Mandala – técnica auto-sustentável de agricultura que permite ao agricultor familiar produzir para seu próprio consumo como também existe a possibilidade de comercialização dos produtos excedentes, baseando-se no manejo dos agroecossistemas, nos princípios ecológicos que consistem na diversificação de culturas e reciclagem de nutrientes.

Barragens Subterrâneas - A barragem subterrânea é uma tecnologia alternativa de captação e armazenamento da água de chuva no interior do solo. Ela é instalada em locais situados em ponto estratégico do terreno, onde escorre o maior volume de água no momento da chuva. Sua construção é feita escavando-se uma vala perpendicular ao sentido da descida das águas até a profundidade onde se encontra a rocha matriz. Esta técnica permite ao agricultor continuar plantando mesmo em períodos de estiagem, pois a água se retém no solo por mais tempo e possui evaporação mais demorada.

Estas técnicas vêm sendo implementadas principalmente junto aos criadores de gado da região, que compõe a Cadeia Produtiva do Leite, uma das maiores atividades econômicas do Seridó Potiguar. Através do uso do manejo e também do rodízio dos pastos os criadores já puderam observar um gado mais saudável e com um sensível ganho de peso – e, conseqüentemente, o leite de melhor qualidade.

Outro aspecto de grande importância na propagação e uso destas técnicas entre os criadores de gado está na formação de uma consciência ecológica, pois como sabemos



a cultura da pecuária é uma das maiores devastadoras de florestas nativas, e neste caso o aprendizado e a aplicação das técnicas são de grande valia para o equilíbrio natural da região já tão castigada pela seca.

Os resultados também envolveram cursos de formação sociopolítica e técnica ministrados através de “Rodas de Conversas” nas comunidades contempladas nas ações após trabalho de pesquisa-ação, além de visitas técnicas durante a fase inicial de desenvolvimento dos projetos. Paralelamente às “Rodas de Conversa”, foram realizados eventos acadêmicos com participação do público-alvo de jovens e adultos contemplados nos cursos de formação sociopolítica e técnica, sejam a I Semana De Economia Solidária, I Semana Da Mulher, I E li Jornada Do Trabalhador, I Colóquio Internacional De Economia Popular Solidária. Os cursos de formação sociopolítica e técnica totalizaram duração de mais de 600 horas, e obtiveram mais de 500 participantes com participação igual ou superior a 70% de presença.

Conclusões

A produção do conhecimento científico nas instituições de ensino superior no Brasil deve estar vinculada às demandas sociais prioritárias que possibilitem o fortalecimento de processos políticos, econômicos e culturais voltados para a emancipação da sociedade. Tal pressuposto embasa os diversos eixos teóricos abarcados para as ações de ensino, pesquisa e extensão na área dos movimentos sociais.

Na área da educação, as exigências de aprendizados voltados a preparação para a vida social incorporam todas as *pedagogias de levante* (Mariana, 2003) enquanto possibilidades reais de desenvolvimento de troca de conhecimentos – alavancados no cotidiano daqueles que ainda encontram-se indignados com o projeto de sociedade capitalista e, por isso, se levantam e se insurgem para resistências e superações.

A diversidade teórica, por sua vez, procura estabelecer diálogos entre as várias correntes que analisam, operam, sistematizam e propõe ações concretas para a interlocução entre as temáticas da educação, trabalho e meio ambiente, bem como suas correlações com os movimentos sociais contemporâneos. Esta diversidade teórica, no entanto, possui um ponto em comum de intersecção, seja a autonomia social.

A partir das ações do LAMPEAR, o horizonte da autonomia social procurou desenvolver praxis pedagógicas em prol do papel ativo da comunidade em reassumir o controle da educação de suas futuras gerações, representando situações educativas articuladoras dos princípios de uma nova maneira de compreensão do mundo. Dentre tais princípios,



destaco: a) a crítica da divisão social do trabalho; b) o resgate de conhecimentos tradicionais populares voltados para o fortalecimento das habilidades locais de autogoverno e do uso sustentável dos recursos naturais, assim como a substituição de preceitos econômicos de exploração por práticas econômicas de cooperação;

c) a organização e implementação do processo educativo de forma coletiva e democrática, envolvendo educadores e educandos em práticas autogestionárias; d) a defesa dos direitos humanos.

Assim, a autonomia social está compreendida, antes de tudo, através de suas configurações históricas. Ou seja, a realidade da luta social – tendo como foco principal os movimentos sociais – que elucida a busca pela autonomia dentro de suas especificidades e contextos históricos, enriquecendo a compreensão a partir das contradições e conflitos inerentes a qualquer processo.

Notas

¹Universidade de Brasília, Brasil fbmariana@hotmail.com

² Cf. Bey (2001), p. 24.

³ Cf. Bey (2001), pp. 26-27.

⁴ Cf. Bey (2001), pp. 27-28.

⁵ Cf. Bey (2001), p.58.

⁶ Ver também Bernardo (1998), pp. 95-98, em “*A publicidade comercial tornou-se uma mensagem política*”.

Referências bibliográficas

Bernardo, João. Transnacionalização do capital e fragmentação dos trabalhadores: ainda há lugar para os sindicatos? São Paulo: Boitempo, 2000.

Bey, Hakim. TAZ: zona autônoma temporária. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2001.

BRUNO, Lúcia. “Reestruturação capitalista e Estado Nacional”. In: Oliveira, D. & Duarte, M. (org.) Política e trabalho na escola: administração dos sistemas públicos de educação básica. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. Castoriadis, Cornelius. A instituição Imaginária da Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 1983.

Freire, P. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. Internacional Situacionista. Antologia. Lisboa: Edições Antígona, 1997.



Mariana, Fernando B. Autonomia, cooperativismo e Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Tera (MST): contribuições educativas para autogestão e pedagogias de levante. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003.

Whitaker, D. C. A. *Sociologia Rural: questões metodológicas emergentes*. Presidente Venceslau: Letras à Margem, 2002.



Frente Dos Moradores Prejudicados Da Bacia Do Una (FMPBU) em Belém/Pará: Lutas pelo direito à cidade.

André Luiz Santos Alves
Edivania Santos Alves
José de Jesus Costa

Resumo

Este artigo apresenta uma análise acerca da atuação política desenvolvida pela Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una (FMPBU). Narra a formação deste movimento social imbricada à luta por uma cidade mais digna para todos com justiça social, além de perpassar pela discussão sobre o Projeto de Drenagem, Vias, Água e Esgoto das Zonas Baixas de Belém, o Projeto Una, cujas obras ocorreram na referida área entre os anos de 1993 e 2004.

Palavras chave

Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una (FMPBU); Política de Urbanização; Movimento Social, Direito à Cidade; Segregação Sócio-Espacial.

Abstract

This article presents an analysis about the political action developed by the Unaffected Residents' Front of the Una Basin (FMPBU). It narrates the formation of this social movement imbricated to the struggle for a more dignified city for all with social justice, besides going through the discussion about the Drainage, Roads, Water and Sewage Project of the Lower Belém, Project Una, whose works occurred in the between 1993 and 2004.

Keywords

Front of the Impoverished Residents of the Una Basin (FMPBU); Urbanization Policy; Social Movement, Right to the City; Socio-Spatial Segregation.

Introdução

Inicialmente é importante explicar o contexto histórico da formação da Bacia do Una e os impactos decorrentes da execução do Projeto de Macrodrenagem na referida bacia localizada na cidade de Belém com vistas a facilitar a compreensão das ações e dos anseios políticos da Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una (FMPBU).



A Bacia do Una é uma área geográfica que abrange 20 bairros da cidade de Belém (PA). Trata-se de uma extensão territorial que abrange aproximadamente 60% do sítio urbano de Belém, com uma área de 36,64 km² e 397.339 habitantes segundo o último censo do IBGE (2010). Até os anos 1990 a Bacia do Una era composta por uma grande quantidade de áreas alagáveis – cerca de 19% do seu território – que foram ocupadas por populações de baixa renda (Trindade Júnior, 1997). Migrantes do interior do estado e até mesmo de outras áreas empobrecidas da capital ocuparam terrenos úmidos e nas encostas dos igarapés que recortavam a cidade, caracterizando a formação dos assentamentos precários conhecidos nos termos locais como *baixadas*. Alguns dos bairros da Bacia do Una situados mais próximo do centro da cidade como Fátima, Pedreira, Telégrafo e Sacramento também receberam estes contingentes populacionais.

Durante os anos 1990 até meados dos anos 2000 a Bacia do Una passou por uma intervenção física que transformou substancialmente a paisagem urbana e o modo de vida de seus habitantes. Tratou-se de um grande projeto de vias, drenagem, esgoto e abastecimento de água chamado Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una (PMU) ou, simplesmente, Projeto Una. Entre suas mais importantes medidas, o Projeto Una aterrou áreas alagadiças, abriu ruas onde antes havia pontes de madeira e, principalmente, executou um amplo sistema de drenagem e acúmulo de águas pluviais formado por galerias subterrâneas e quilômetros de canais onde antes havia igarapés.

Este artigo discute o processo de transformação da Bacia do Una e seus impactos ambientais pela ótica da luta de movimentos sociais presentes neste espaço, pois existem inúmeros movimentos populares e centros comunitários organizados territorialmente nos vinte bairros que fazem parte da Bacia do Una. Contudo, nos deteremos exclusivamente à atuação política da FMPBU, um movimento organizado inicialmente por moradores do bairro da Pedreira mas atualmente com alcance ampliado para outros bairros que vivenciam os mesmos problemas de alagamentos e falta de manutenção das obras de saneamento.

Desenvolvimento

O Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una (PMU)

A cidade de Belém é uma cidade amazônica que possui em sua geografia territorial um número gigantesco de córregos, rios, braços de rios e terrenos alagáveis e alagadiços, além de localizar-se cerca de quatro metros abaixo do nível do mar. Esse quadro sinaliza que Belém têm sua história marcada por problemas de cunho ambiental



agudizados pela ausência de planejamento do Estado, o que contribuiu diretamente para tornar crônicos os problemas desta urbe.

O problema de alagamentos gerados pela falta de macrodrenagem e outros serviços para se consolidar uma urbanização de fato, podem ser encontrados desde a formação da cidade e estão presentes na atualidade. A discussão acerca da urbanização da cidade e particularmente das áreas de baixadas (as mais atingidas por alagamentos além de possuírem outros problemas graves e onde habita a população de menor renda) é antiga, pois há décadas Belém vem sofrendo mudanças estruturais relacionadas à processos socioeconômicos como o ciclo da Borracha e a *Bellé Époque*, Estado Novo/Acordos de Washington e Grandes Projetos na Amazônia).

Um marco importante a ser analisado são as mudanças urbanísticas ocorridas a partir da década de 1970, quando foram discutidas possíveis soluções sanitárias para essas áreas de baixadas presentes na cidade. Acerca disso a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) produziu um documento intitulado Considerações sobre o Programa de Recuperação de Baixadas (1975), onde informava:

O Governo do Estado do Pará, a SUDAM e o DNOS, no dia cinco de novembro de 1973, resolveram, de comum acordo, celebrar um Convênio que levou o número 09/73. Seu objetivo foi de regular a participação financeira e técnica de cada conveniente, numa conjunção de esforços visando a execução de um programa integrado para o prosseguimento dos trabalhos de saneamento da cidade de Belém-PA, sendo um dos pontos cruciais a recuperação das áreas de baixadas. Assim, ficou estabelecido que ao DNOS caberia a responsabilidade da execução de todos os serviços e obras do Programa, diretamente ou mediante empreitada com terceiros; ao Governo do Estado caberia os encargos com as desapropriações e os desapropiamentos de áreas a sanear, aí incluída a remoção de moradores e a sua localização em outras áreas predeterminadas, bem como os encargos relativos ao projeto de urbanização das áreas recuperadas. (SUDAM, 1975, p. 1)

Como mencionado na citação acima, as iniciativas de intervenção mais sistemática pelo poder público na tentativa de apresentar alternativas para resolver os constantes problemas de alagamentos das áreas de baixada de Belém somente foram formuladas na década de 1970 seguindo a diretriz do planejamento tecnicista (Portela, 2005). Neste caso, o Programa de Recuperação das Baixadas instituído no ano de 1973, posteriormente tomou duas direções complementares: o Plano Global e o Plano de Ação Imediata (PAI).



Anos depois, na década de 1980 foi executado o Projeto Comunidades Urbanas para recuperação Acelerada (CURA), o qual possuía como áreas de intervenção os bairros do Marco e da Pedreira, por meio da realização de obras de drenagem, macrodrenagem, terraplanagem, asfaltamento, calçamento e meio fio (Portela, 2005).

Para Abelém (1989) as intervenções realizadas pelo Estado sob o pretexto de melhorar as condições de vida das classes populares significavam apenas um paliativo para as mesmas, pois na medida em que a cidade crescia, expandia-se com ela a necessidade de novas áreas serem incorporadas ao sistema imobiliário. A realização de projetos de urbanização e a valorização imobiliária, decorrente de sua implementação têm resultado no aumento das taxas e impostos e na ação desenfreada da especulação imobiliária, conseqüentemente na expulsão das camadas populares originárias e na substituição destas por um segmento de maior renda, contradizendo, assim, as justificativas que nortearam a proposta de intervenção do poder público (Portela, 2005).

Abelém (1989) observa também que além dos interesses políticos, existiam os interesses econômicos, não só do governo, que visava garantir o retorno dos investimentos feitos e ainda auferir algum lucro, como também interesses de proprietários particulares que viam no projeto uma maneira de valorizar as áreas até então esquecidas pelo mercado de imóveis. Desse modo, o discurso oficial justificava o projeto como “benefícios sociais”, mas na realidade, estes assumiam (e assumem) papel secundário. (Portela, 2005)

Contudo, houve um grande descontentamento das camadas populares com relação á execução desses projetos que até então buscavam intervir em áreas de baixadas da cidade, levando assim, saneamento básico para inúmeras áreas. Dessa maneira, as organizações populares em Belém passaram a reivindicar junto ao poder público, de forma mais incisiva, soluções para seus problemas, tais como: água, esgoto, saúde, moradia, transporte e escola, bem como a sua participação nas decisões das políticas públicas, garantindo, assim, o seu direito à cidade. (Portela, 2005, p. 127)

Em torno disso, como fruto de uma antiga luta dos movimentos populares, foi proposto em 1985, o Projeto de Recuperação das Baixadas do Una conhecido também como Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una (PMU), ou ainda, Projeto Una, pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB). O financiamento do projeto para execução das obras orçado inicialmente em US\$145.000.000 (cento e quarenta e cinco milhões de dólares) ficou a cargo de três agentes: o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que emprestou quantia significativa ao Governo do Estado, tomador do



empréstimo, e a PMB garantindo a contrapartida local, tendo havido várias visitas de comissões do BID para analisar o Projeto, pois até então o mesmo não financiava municípios. (Portela, 2005). Esta novidade pode nos indicar as mudanças estratégicas decorrentes do novo momento do capitalismo fortemente amparado no sistema financeiro com estímulo ao endividamento público, ao mesmo tempo em que defendia a redução da ação do Estado. Tais idéias se materializariam a partir da década de noventa e atenderiam pelo nome de Neoliberalismo.

O Programa de Macrodrenagem do Una foi um projeto elaborado e executado pelo Governo do Estado tendo em vista o atendimento à população habitante na área da Bacia Hidrográfica do Una, responsável por profundas transformações no meio ambiente e na realidade urbana de uma extensa área da capital paraense.



Mapa 2. Bacia Hidrográfica do Una.
Fonte: Luã Neves (2017)



A área de abrangência deste empreendimento se situa em grande parte dentro da primeira légua patrimonial da cidade de Belém, extrapolando os limites desta primeira légua, nas áreas dos bairros da Marambaia e do Benguí. Essa área corresponde a 3.665 hectares, portanto, mais da metade da primeira légua que corresponde à área de expansão urbana inicial da capital paraense faz parte da Bacia do Una.

A Bacia do Una que é constituída por vinte bairros, sendo quatro de forma parcial: Marco, Nazaré, São Brás e Umarizal e dezesseis de forma integral: Barreiro, Benguí, Cabanagem, Castanheira, Fátima, Mangueirão, Maracangalha, Marambaia, Miramar, Parque Verde, Pedreira, Sacramento, Souza, Telégrafo, Una e Val-de-Cans, o que equivale a 60% do sítio urbano do município de Belém, que por uma questão técnica e administrativa, desde a fase de execução do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una, que durou desde a década de 1980 do século passado, até o ano de 2004 do século atual, está subdividida em sete sub-bacias e mais o Conjunto Residencial Paraíso dos Pássaros – CRPP em Val-de-Cans, onde estão assentadas as famílias que foram remanejadas das áreas alagadas ou alagáveis da baixada do Una. Existem ainda outras 18 áreas de assentamento, localizadas em outros bairros da referida região geográfica.

O projeto da Macrodrenagem da Bacia do Una (PMU) teve seu início a partir do poder público constituído que visando alcançar metas de melhoria da qualidade de vida, buscou garantir aos cidadãos habitantes desta área, o saneamento básico, a renovação urbana e a promoção sócio econômica. O referido projeto caracterizou-se por dois objetivos centrais: solucionar o problema das inundações nas zonas baixas da Bacia do Una, através das instalação de um sistema de drenagem eficiente, cujo destino é a Baía de Guajará; Dotar a todos os habitantes da Bacia do Una de uma infraestrutura adequada em termos de vias de acesso, cobertura das redes de água potável, esgoto sanitário, drenagem pluvial e coleta de lixo, para proporcionar a esta população condições mínimas tendo em vista a sua qualidade de vida. (Governo do Estado do Pará, 2006, p.25)

Trajatória da Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una (FMPBU)

A Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una (FMPBU) surgiu no ano de 2013, durante as manifestações do mês de junho, a partir do encontro de Antônio Carlos e Alexandre Costa, moradores respectivamente dos bairros Umarizal e Pedreira, ambos atingidos por constantes alagamentos. O intuito destes moradores foi dar visibilidade à



problemática não só dos alagamentos, irregularidades e omissões na Bacia do Una após a “conclusão” do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una, como também para o agravamento da situação diante do quinto ano de morosidade do Poder Judiciário do Estado do Pará com relação ao processo de número 0014371-32.2008.814.0301, relativo à Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada pela Terceira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo do Ministério Público do estado do Pará (MPE), na qual a PMB, a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) e o próprio Estado do Pará, respondem desde o dia 16 de abril de 2008 na segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, a execução das inúmeras obras complementares de microdrenagem que ficaram pendentes bem como, a conservação e a manutenção do conjunto de obras do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una, que é agrupado em três grandes sistemas: Saneamento Viário e Macrodrenagem com a utilização dos equipamentos, maquinários e veículos, foram repassados no dia 2 de janeiro de 2005 pelo Estado do Pará através de Cosanpa, ao acervo físico- patrimonial do município de Belém, para a única e tão somente conservação e manutenção tecno-periódica do conjunto de obras do referido projeto; os quais desapareceram sem que ninguém tome providência.

Recentemente o Diário do Pará destacou o vergonhoso panorama urbanístico no qual Belém figura como uma das cidades menos saneadas do Brasil. A matéria acentua o alarmante quadro já inferido em parágrafos anteriores conforme o instituto Trata Brasil, responsável pela:

Divulgação de um ranking, realizado a cada 4 anos, sobre as condições de saneamento entre as 100 maiores cidades brasileiras. Tendo como ano base 2014, o levantamento verificou que, mais uma vez, Belém figura entre as 15 piores do país neste quesito, ocupando a 87% posição. Apenas 12,7% da população composta por 1,4 milhão de habitantes possui coleta de esgoto. O cenário é ainda pior nos municípios de Ananindeua e Santarém, onde a coleta de esgoto é inexistente, classificado em 0%.

A solução sugerida deve incidir diretamente no orçamento da municipalidade que precisará conforme diagnóstico “desembolsar em torno de R\$ 4 bilhões para atingir 100% da cobertura do serviço de tratamento de esgoto, a partir da execução contínua de uma obra com duração de, no mínimo, 20 anos”. Ocorre que a cidade de Belém vivencia paradoxos da modernidade tratados como insolúveis pelos agentes públicos, a exemplo da baixa taxa de emprego e renda sobreposta pelo alto custo da cesta básica e dos impostos estaduais; agravando o quadro da pauperização de sua população, duplamente penalizada pela gestão pública municipal, sem a devida contrapartida em



serviços e obras. Ainda assim, o atual prefeito Zenaldo Coutinho decidiu pelo reajuste do IPTU em até 300% para o exercício de 2017.

Em paralelo ao processo do aumento da taxaço de impostos sobre os municípes da cidade de Belém, resultante da aplicaço de uma política tributária adotada pela atual gestão que penaliza os mais vulneráveis socioeconomicamente, verifica-se um endividamento público acarretado pelas autorizaço da maior parte dos vereadores da CMB às solicitaço de operaço de crédito de natureza financeira sem nenhuma exigência de prestaço de contas e tão pouco efetivaço das obras e serviços para os quais supostamente se destinariam tais recursos. Nota-se assim total dissonância e conflito com as atribuiço fiscalizadoras, competência do legislativo municipal. Em dezembro de 2012, foi contratado empréstimo de R\$97.000.000,00 (Noventa e Sete Milhões de Reais) seguido de US\$125.000.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Milhões de dólares americanos) em 2013. A tal quantia foi acrescido R\$700.000.000,00 (Setecentos Milhões de Reais) também no ano de 2013. Em todas as situaço, o pretexto utilizado pela gestão local para a tomada de significativo montante relaciona-se diretamente à execuço do Programa de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova (PROMABEN) e à reabilitaço dos canais da Bacia Hidrográfica do Una,

[...] junto as seguintes instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, BID, Banco Mundial – BIRD/AID, Companhia Andina de Fomento – CAF, Agência de Cooperação Internacional do Japão – JICA, conforme informações extraídas da Lei Ordinária Nº 8.970 de 21 de dezembro de 2012, publicada no DOM Nº 12.239, de mesma data. (Alves, 2017, p. 141)

Em maio de 2018, a sessão extraordinária convocada para discussão e votação do “projeto de lei de autoria do prefeito Zenaldo Coutinho solicitando autorização para que o município possa contratar empréstimo no valor de até R\$ 200 milhões com o Banco do Brasil” finalizou sob forte protesto do vereador Fernando Carneiro do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que na ocasião chegou a “apresentar 51 emendas” mas frente às dificuldades de enfrentamento à bancada de apoio do alcaide sustentou

apenas a que determina a prestação de contas obrigatória da destinação dos recursos. Os vereadores votaram e aprovaram a emenda defendida pelo PSOL e a partir daí o projeto do Executivo foi à votação, sendo aprovado com a inclusão do artigo 6º, pelo qual “O Executivo Municipal fica obrigado a realizar prestação de contas e apresentação de cronograma junto à Câmara Municipal de Belém a cada 4 (quatro) meses, de todos os desembolsos relativos à presente Operação de Crédito”.



Do ponto de vista da preservação dos patrimônios públicos naturais e físicos, verifica-se que o quadro mais dramático e desumano diz respeito às obras de macrodrenagem das bacias hidrográficas que atinge a maioria quase absoluta da população pobre e preta da urbe belenense: a macrodrenagem do Una iniciada em 1993. Houve a formalização do Comitê Assessor com 18 membros e composição plural que inicialmente tinha o papel de decidir “[...] apenas no âmbito do remanejamento, da Educação Ambiental. Passando a ser planejador e fiscalizador em geral, onde todos os esclarecimentos sobre as obras, o cronograma físico-financeiro e a prestação de contas de recursos [...]” (ENCONTRO de Moradores da Bacia do Una, Relatório Final, 2001, p. 5), responsável em parceria com lideranças comunitárias pela realização em dezembro de 2001 do I Encontro de Moradores da Bacia do Una que registrou a presença de 470 inscritos e 110 entidades populares.

O projeto Una, foi entregue oficialmente à população em 2005 pelo governador à época Simão Jatene, dando como concluído “a construção de 17 canais, seis galerias, e duas comportas” onde o “Estado investiu US\$ 169 milhões e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) US\$ 143 milhões. No total, mais de US\$ 300 milhões de recursos.” Valendo ressaltar que tal conjunto de obras, está agrupado nos três sistemas mencionados, e sua devida conservação e manutenção periódica, estão previstas em três manuais técnicos:

- 1) *Manual de Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário e Água Potável da Bacia do Una, agosto de 2001;*
- 2) *Manual de Operação e Manutenção de Drenagem, Vias e Obras de Arte Especiais da Bacia do Una – Volumes I e II, maio de 2002;*
- 3) *Manual de Operação e Manutenção das Comportas do Una e Jacaré, maio de 2002.*

Apesar do alto investimento não produziu os efeitos prometidos nos discursos e documentos oficiais e sonhados por milhares de moradores que continuam a padecer com os constantes alagamentos que inundam suas residências e comércios provocando doenças em crianças, adultos e idosos, a perda de móveis e eletrodomésticos e limitando sua liberdade de deslocamento por ficarem impedidos de sair de casa por horas a fio.

Portanto, na ausência do Comitê Assessor da Nova Bacia do Una (CONGEB/Una) a atuação política promovida pela FMPBU e pela Frente das Bacias de Belém (FBB),



empenhados na mobilização dos moradores das áreas e bairros que compõe a bacia hidrográfica do Una tendo como mote a luta contra os constantes alagamentos prejudiciais à saúde e aviltantes à dignidade humana além de convocar e realizar audiências públicas acionando órgãos e autoridades “competentes” para tomar ciência e resolver as questões levantadas pela FMPBU, a saber:

Perguntas que precisam ser respondidas:

1. Onde estão 22 milhões em equipamentos do projeto de macrodrenagem do Una?
2. Porque Governo, Prefeitura e COSANPA são réus a quase 10 anos sem que a justiça tome nenhuma atitude?
3. Porque nenhuma medida emergencial é tomada quando mais de 20 bairros sofrem alagamentos?
4. Como a COSANPA pode cobrar 60% nas contas de água a título de ‘esgotamento sanitário’ se não existem estações de tratamento?
5. Porque milhões seguem sendo investidos em projetos semelhantes ao da bacia do Una, se repetem os mesmos erros e caminham para provocar *as mesmas calamidades*?

O ponto cinco do documento acima citado levanta a questão central desse debate. Atualmente, os prejuízos materiais e sociais resultantes dos alagamentos se fazem sentir em praticamente toda a extensão do município. Desta feita, inversamente ao anunciado, as precariedades agravaram-se após a execução incompleta do projeto de macrodrenagem confirmando queixas e suspeitas que os discursos camuflam e ocultam as reais intenções do Estado em sua acepção de agente indutor da redefinição urbanística a serviço da lógica do mercado imobiliário que se alinha aceleradamente aos interesses monopolistas internacionais.

Entretanto, a atitude de moradores prejudicados da Bacia do Una, converge na direção da mobilização permanente com a fomentação de canais de debate como o blog da FMPBU, a produção de materiais informativos que atualizam os moradores e a sociedade, realização de inúmeras reuniões e audiências públicas, como prova a imagem abaixo. Esse ânimo têm induzido a coalizão de movimentos, parlamentares, instituições a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, até mesmo funcionários de órgãos públicos como Defensoria e MPE, visando a cobrança das obras de microdrenagem não realizadas, a prestação de contas sobre a destinação de equipamentos e sobretudo a solução definitiva dos alagamentos.



Audiência Pública
O Alagamentos em Belém e os projetos de Macrodrenagem

ORGANIZAÇÃO:
 Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una
 Comissão de Direitos Humanos da OAB

APOIO:
 Comitê Popular Urbano

PARU - Programa de Apoio à Reforma Urbana / UFPA

Local:
 Sede da OAB (Praça Barão do Rio Branco, 63 (prox. Praça da Trindade)

Data:
 11/03/2015,

Horário:
 início às 15 Hrs

PAUTAS DA AUDIÊNCIA:

1. Cobrar do Ministério Público do Estado e Federal, CNJ, CNMP, o andamento dos processos pela não execução de obras de microdrenagem e abandono da manutenção das estruturas criadas no projeto de Macrodrenagem da bacia do Una.
2. Fazer pressão quanto aos resultados da CPI que apurou o sumiço de 22 milhões de reais em equipamentos que deveriam estar sendo usados para impedir os alagamentos atuais;
3. Criação de um amplo trabalho popular de enfrentamento aos alagamentos e aos prejuízos que estão sendo provocados;
4. Questionar a COSANPA sobre os 60% de taxa, cobrados na conta de água a título de esgotamento sanitário que não existe, pois as obras para tal não foram realizadas;

www.frentebaciadouna.blogspot.com.br

Fonte: Blog da Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una

A aplicação do capital excedente ocorre pela incorporação sistemática de novas áreas de terras urbanizadas e regularizadas pelo Estado e agora disponibilizadas ao circuito imobiliário e cartorial transformando-se em zonas de investimento livres de qualquer legislação regulatória permitindo a obtenção de alta lucratividade imobiliária e fundiária por meio da aquisição de terrenos, casas ou mesmo vilas de casas, pequenos e médios prédios comerciais que darão lugar às novas modalidades de empreendimentos imobiliários que conforme a localização será torres de apartamentos ou loteamentos fechados de luxo.

Por fim, é importante pontuar que a FMPBU ao longo desses anos ganhou espaço, e tendo voz em lugares que podem ajudar nesta luta, como por exemplo o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Pará (OAB/PA), desde 2016 essa comissão auxilia e acompanha a FMPBU, além disso, ao longo de 2017, houve diversas audiências públicas para debater os problemas gerados pelo abandono da Bacia do Una, no auditório da sede da OAB/Pará.

Conclusão

O Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una foi uma iniciativa de grande porte executada pelas esferas Estadual e Municipal em Belém com o financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Entre 1993 e 2004 foram realizadas obras de infraestrutura urbana que, segundo os discursos oficiais, seriam responsáveis pela melhoria da qualidade de vida da população de uma área que abrange vinte bairros da capital paraense. No entanto, o abandono do projeto – principalmente do sistema de macrodrenagem - e a não execução dos sistemas de microdrenagem após a conclusão



das obras coloca em risco o investimento nos benefícios sociais um dia oferecidos pelo PMU.

Verificamos um município com forte endividamento e incapacitado financeiramente de desenvolver projetos de interesse coletivo de forma autônoma sem que haja a interferência e o financiamento de órgãos e entidades externas ao mesmo tempo em que a maioria de sua população amarga péssimos índices de desenvolvimento humano, o que corrobora a idéia de abandono e prejuízos constantes sobretudo aos moradores das áreas de baixada por parte das autoridades municipais. Temos então o desprezo às mínimas condições de existência humana combinada à negação dos direitos e das políticas públicas. É necessário romper este ciclo de aparente fatalidade. É o que tem tentado fazer os distintos movimentos e organizações sociais com atuação na cidade de Belém. Recuperar seu protagonismo pela constituição de um campo de ações que vão desde o enfrentamento legal-judicial à mobilização social.

Concluimos o quanto as gestões desastrosas vivenciadas na cidade de Belém durante os últimos treze anos têm gerado enormes prejuízos ao conjunto de obras executadas pelo PMU. A falta de manutenção do Projeto é um problema alarmante. Entretanto, o ponto positivo em meio a tudo isso é que mesmo diante de uma conjuntura tão difícil, é possível ver a população se reunir em movimentos que lutam pelo que deveria ser o mínimo, lutam pelos seus direitos básicos, direitos os quais todo cidadão tem que ter garantido, o direito à uma habitação digna. Neste artigo destacamos a FMPBU como um movimento que combate não apenas a segregação sócio-espacial e a negação de direitos aos moradores da Bacia do Una como também em prol de uma cidade para todos e mais justa.

Referências

Abelém. Auriléa Gomes. Urbanização e remoção: por que e para quem? Belém: Centro de Filosofia e Ciências Humanas/NAEA/UFPA, 1988.

Alves, André Luiz Santos. Impactos do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una nos bairros da Pedreira e de Fátima: doze anos depois. Trabalho de Conclusão de Curso - Faculdade de Serviço Social, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Pará. Belém: UFPA, 2017.

Alves, Edivania Santos. Regularização fundiária na Estrada Nova de Belém: o que está em jogo no Programa Chão Legal? Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós Graduação em Sociologia e Antropologia. Belém: UFPA, 2017.



Portela, Roselena de Souza, Planejamento, Participação Popular e Gestão de Políticas Urbanas: A Experiência do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una (Belém/PA). Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Sociais Aplicada. Belém: UFPA, 2005.

Sudam, Considerações sobre um programa de recuperação de baixadas de Belém. Belém, 1975.

Trindade Júnior. Saint. Clair. Produção do espaço e uso do solo urbano em Belém. Belém: UFPA/NAEA/PLADES, 1997.



O público da agricultura familiar – Uma mirada a partir das organizações e movimentos sociais na REAF Mercosul¹.

Silvia Aparecida Zimmermann²

Resumo

A Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) Mercosul, criada em 2004, implica a participação de representantes de governo e da sociedade civil de países vinculados ao Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e Mercosul Ampliado (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru). A REAF contribui para a difusão e troca de experiências de ações e políticas públicas no Mercosul. Na REAF, destaca-se a atuação da Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul (Coprofam), uma rede que envolve nove organizações sociais e que a partir da REAF promoveu a construção e um público da agricultura familiar no Mercosul. Esta construção é uma constante nos eventos da REAF, dado que o espaço apresenta uma participação flutuante, na ordem 70%. A partir da sistematização das listas de presença nos eventos da REAF, da observação participante entre os anos de 2014 e 2019 e realização de entrevistas, este trabalho tem por objetivo evidenciar o público da agricultura familiar que participa da REAF Mercosul. Os conflitos associados a esta dinâmica também são explorados, por exemplo, a relação com a *Vía Campesina* e seus movimentos e organizações sociais. Consta-se que a REAF se constitui em uma arena pública de construção do público da agricultura familiar, em que se afrontam os pretendentes à propriedade do problema público, de seu controle, sua exclusividade, de construção de concepções, difusão de conceitos e tomada de decisão, notadamente as redes de organizações sociais que participam da REAF, grande parte vinculadas à Coprofam.

Palavra chave

REAF Mercosul, Organizações e Movimentos Sociais Rurais; Agricultura Familiar; Público, Sociedade Civil.

Introdução

Para Dagnino et al (2006) a construção democrática na América Latina é resultado da consolidação democrática eleitoral, a insatisfação com estas democracias, o aprofundamento da construção da cidadania e o exercício de Direitos. Estes elementos contribuiram para a ampliação dos espaços de participação social e para elaboração de políticas públicas na região (González e Mballa, 2017; Welp, 2015).



Neste artigo focalizo na REAF-Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar Mercosul, enquanto um espaço público de participação de representantes da sociedade civil e de governo dos diferentes países membros plenos e associados do Mercosul. A REAF surge em 2004 e tem contribuído para a difusão e troca de experiências de ações e políticas públicas na região. Neste espaço público participam representantes dos governos dos países da região e representantes das organizações e movimentos sociais para agricultura e espaço rural, com destaque para a Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul (Coprofam), uma rede de organizações sociais (Scherer-Warren, 2006), que envolve nove organizações sociais da região, também organismos multilaterais das Nações Unidas, como o FIDA-Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e a FAO- Organização das Nações Unidas para Agricultura.

A REAF aproxima diferentes atores políticos, que em suas atividades trocam experiências, debatem e firmam compromissos políticos, constituindo um público da agricultura familiar na América Latina (Zimmermann, 2018). Entretanto, a REAF é um espaço de natureza consultiva ao CMC-Conselho do Mercado Comum, este sim deliberativo, mas contata-se que seus encaminhamentos têm resultado em deliberações efetivas para a inclusão da agricultura familiar nas políticas públicas na região, a partir de diferentes concepções (Sabourin et al, 2014; Salcedo e Guzmán, 2014), desde ações de estímulo à produção interna nos países, facilitação de comércio, compras públicas, etc.

O presente artigo tem por objetivo evidenciar o público da agricultura familiar construído pelas organizações e movimentos sociais que participam(ram) da REAF Mercosul ao longo dos anos. Neste sentido, a pesquisa aqui apresentada é fruto da sistematização de 24 listas de presença da REAF em planilha de excel³, de eventos realizados entre 2004 a 2018, documentos oficiais e públicos no site da REAF. As listas apresentam os participantes pela delegação do país e conforme a categoria de sociedade civil, governo e outros. Em junho 2019, na XXX REAF em Buenos Aires, dialoguei sobre a sistematização com representantes da Secretaria Técnica da REAF, que organizava os eventos e era responsável pelas listas de presença. Além disso, destaco que acompanho presencialmente a REAF desde 2014, com recursos de projetos de extensão (UNILA) e de pesquisa (CNPq e UNILA).

O artigo está dividido em quatro seções. A primeira apresenta a construção da REAF e como este espaço se constitui em uma arena pública e espaço de participação social na região. A segunda, a partir de uma leitura das listas de presença dos eventos



ocorridos entre 2004 e 2018, apresenta o público da agricultura familiar na REAF. Na terceira destaco as organizações da sociedade civil que constam nas listas de presença e, por fim, apresento as considerações finais e as referências bibliográficas.

A construção da REAF - Uma arena pública *lócus* do público da agricultura familiar

Entendo a REAF como uma arena pública, na acepção de Cefai (2002), por ser também *lócus* de construção do público da agricultura familiar na região e onde se afrontam os pretendentes à propriedade do problema público, de seu controle, sua exclusividade, de construção de concepções, difusão de conceitos e tomada de decisão (Zimmermann, 2018). Esta arena emerge e se estabelece num cenário favorável a participação social no Mercosul, sendo reflexo do engajamento político na defesa de um público da agricultura familiar na região, que disputa lugar entre recursos simbólico e material entre os atores políticos.

Esclareço que o Mercosul surge no início dos anos de 1990 como um mecanismo de promoção de acordos comerciais entre os Estados na região que buscavam alternativas à globalização econômica - financeira e representava muito mais uma oportunidade de abertura dos mercados nacionais por meio de acordos comerciais, do que um meio para implementar políticas efetivas para integração regional (Martins e Silva, 2011). São membros plenos a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e associados o Chile, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Nota-se que em 2012 houve a inclusão da Venezuela, mas em 2016 este país foi suspenso por tempo indeterminado⁴. Nos anos 2000, diante de uma conjuntura político- institucional regional favorável à participação social, o Mercosul incorpora ações mais efetivas na implementação de políticas para integração regional, configurando a segunda geração de mecanismos de participação social - “mecanismos que visam articular posições políticas no interior do Estado, no Parlamento e nos movimentos sociais, nacionais e regionais, em defesa do Mercosul e de uma agenda positiva para a integração”(Martins e Silva, 2011: 67). Neste período foram criadas as Cúpulas Sociais e o Parlasul, bem como a ampliação no número de reuniões especializadas do Mercosul.

A arquitetura de funcionamento do Mercosul é complexa. Para resumir, todas as instâncias criadas na sua estrutura devem ser de consenso para seguirem para o CMC- Conselho do Mercado Comum, este sim o órgão máximo deliberativo do Mercosul. Nesta instância, se o encaminhamento for favorável, e de consenso, será reconhecido no âmbito das Recomendações e Resoluções do Mercosul e deverá ser adotado pelos



países membros plenos e recomendado sua adoção pelos países associados. Abaixo do Conselho do Mercado Comum estão os Grupos de Alto Nível, Reuniões de Ministros e Autoridades, o GMC-Grupo do Mercado Comum, este com Fóruns, Comissões, Grupos, Subgrupos de Trabalhos, Reuniões Especializadas e Grupos Ad Hoc. As treze reuniões especializadas do Mercosul são órgãos criados de caráter permanente, para desenvolver políticas vinculadas ao processo de integração em áreas temáticas específicas ou para assistir o GMC, o qual envia suas deliberações para o CMC (Pont, 2018).

É neste cenário que surge em 2004 a REAF, para assessorar o GMC por meio de projetos e normativas para à agricultura, sendo coordenada por representantes governamentais, mas envolvendo representações da sociedade civil da região⁵, aspecto que a torna uma experiência singular no contexto regional (Pont, 2018), pois as demais reuniões especializadas não têm esta composição. Cada país deve ter uma REAF Nacional, com rotina própria de encontros e debates, incluindo representantes da sociedade civil local. Os eventos da REAF regionais ocorrem semestralmente, de forma rotativa nos países do Mercosul, respeitando a Presidência Pró Tempore do Mercosul e seguindo a ordem alfabética.

Na origem da REAF ganha destaque o papel da sociedade civil, mais precisamente a Coprofam-Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul. Esta rede de organizações a época encaminhou uma carta ao CMC Mercosul solicitando a criação de um espaço para tratar da agricultura familiar (Carvalho, 2011). A organização buscava trazer para a agenda do Mercosul demandas para as políticas públicas de segmentos não tão capitalizados da agricultura, dado que o espaço do Mercosul que tratava do tema da agricultura era a Reunião dos Ministros Agricultura, que tinha como foco o segmento empresarial do setor, mais popularmente e simplificada aqui chamado de agronegócio.

A Reunião de Ministros funcionava por meio do Conasur-Conselho Consultivo de Cooperação Agrícola, caracterizado como um mecanismo de consulta e coordenação para os Ministérios de Agricultura, em assuntos de desenvolvimento rural e agrícola, bem como nas relações com organismos internacionais de cooperação técnica e financeira. Em 2003 o Conasur foi sucedido pelo CAS- Conselho Agropecuário do Sul, que tem por objetivo promover a articulação do sistema agropecuário da região e a coordenação de ações em políticas públicas para o setor. A Reunião de Ministros do Mercosul mantém sua agenda de atividades por meio do CAS, de forma que a criação



da REAF representa a instalação de uma arena específica para tratar da agricultura familiar, comportando dois espaços para tratar do tema da agricultura, o CAS e a REAF. Em novembro de 2015, na XXIV REAF, após um processo de aproximação, teve início uma articulação para atividades conjuntas entre CAS e REAF.

Para Carvalho (2011: 72/73) a REAF surge da intenção de diferentes atores políticos em fortalecer a categoria agricultura familiar, estreitar as relações com a sociedade civil e tornar mais transparente as ações de relações internacionais na região; sobretudo, abrir espaço no Subgrupo 8 do Mercosul (SGT8) voltado à agricultura, que era protagonizado pela Reunião de Ministros de Agricultura, em clara disputa pelo espaço dado até então ao agronegócio na definição das políticas públicas na região, e passou a incluir a participação da sociedade civil. Assim, a REAF é utilizada como um espaço “bumerangue” – que permite às instituições influenciar atores e processos em escala doméstica -, e na forma “trampolim” – que permite elevar temas e ideias do nível doméstico para o nível transnacional e, desta forma, as demandas para a agricultura familiar ganham expressão supranacional (Von Bullow e Carvalho, 2014: 230).

O público da Agricultura Familiar na REAF – Uma leitura a partir das listas de presença entre 2004 e 2018

Entre os anos de 2004-2018 houve 29 seções regionais da REAF. Destas, tivemos acesso as listas de presença de 24 sessões da REAF (estão indisponíveis a lista de presença nas seções da REAF I, II, XIV, XIX, e XXIII). Na sistematização identifiquei 3725 participações, resultando em uma média de 128 participações por evento, envolvendo 2071 participantes.

Na Tabela 01 constata-se que ao longo dos anos há uma ampliação no número das participações na REAF, que inicia com menos de 100 participantes e alcança cerca de 300 participantes na X edição da REAF. Entre os participantes encontramos aqueles estiveram presentes em mais de um evento, contudo, constata-se que 73% do público participou apenas uma vez; 85% entre uma e duas vezes e 90% entre uma e três sessões. Neste sentido, a maioria do público da REAF muda a cada evento.

De um lado esta situação pode ampliar o alcance do debate sobre políticas para o público da agricultura familiar na região, pois a cada evento novas pessoas participam e tomam contato com as pautas da REAF. De outro lado, uma alternância do público dificulta a compreensão e domínio das regras de funcionamento da REAF, de forma que os participantes alcancem resultados com sua participação a cada evento. Um grupo reduzido (1%) dos participantes esteve em dez ou mais REAFs. Entendo que são estes



os detentores de maior conhecimento da história da REAF, e são responsáveis pela tarefa de garantir a continuidade entre os eventos. Neste grupo encontram-se representantes da Secretaria Técnica da REAF, representantes de governo e sociedade civil, ao menos um de cada país.

O país sede do evento notadamente é o que apresenta uma quantidade maior de participantes, conforme os dados das delegações por país. Entre a categoria. Outros países participantes da REAF registro a presença da África do Sul, Alemanha, Botsuana, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, França, Guatemala, Honduras, Itália, México, Moçambique, Nicarágua e República Dominicana. Ou seja, embora a REAF seja uma arena pública regional, participam do evento uma diversidade de atores políticos não restritos a América do Sul ou a América Latina.

Um dos fatores determinantes para a participação nos eventos da REAF são os custos envolvidos no deslocamento e hospedagem. Conforme diálogo com a Secretaria Técnica da REAF, esta questão contribuiu para que a XX REAF, que ocorreu em novembro de 2013 na Venezuela, tenha sido um dos menores eventos em termos de participação, com 86 participantes. Esclareço que o FIDA dava suporte técnico e financeiro à REAF até 2009, quando foi criado o FAF-Fundo de Agricultura Familiar, de responsabilidade dos países membros do Mercosul, que passou a garantir os recursos para o funcionamento da REAF.

Destaco a variedade de atores políticos que participam da REAF. Nestes identifico em separado a participação das universidades, pois se verifica um aumento desta participação ao longo dos anos, representando o crescente interesse da academia pela REAF. De modo geral a participação de representantes da sociedade civil e governo é equilibrada, respectivamente 45% e 43%, mas também é possível verificar um aumento gradual na participação de representantes da sociedade civil, tendo seu ápice na X REAF, ocorrida no Rio de Janeiro, chegando a 63% dos participantes. Neste evento a maior delegação presente era brasileira. Além disso, de modo geral, 9% das participações na REAF são realizadas por representantes de organizações internacionais ou organismos multilaterais, e cerca de 3% são representantes de Universidades, em sua maioria, públicas.



REAF/País	Gobierno		Sociedade		Org.		Universidades		Total
	Qt.	%	Qt.	%	Qt.	%	Qt.	%	
III-Py	37	45	30	37	10	12,20	2	2,44	82
IV-Ur	53	42	58	46	10	8,00	4	3,20	125
V-Ar	59	38	72	46	13	8,39	3	1,94	155
VI-Br	42	30	84	60	12	8,63	1	0,72	139
VII-Py	72	49	53	36	17	11,56	2	1,36	147
VIII-Ur	68	56	38	31	10	8,26	3	2,48	121
IX-Ar	108	56	75	39	8	4,15	1	0,52	193
X-Br	92	31	188	63	8	2,68	3	1,01	298
XI-Py	46	38	66	54	7	5,74	3	2,46	122
XII-Ur	78	39	100	51	13	6,57	7	3,54	198
XIII-Ar	55	35	93	59	9	5,70	1	0,63	158
XV-Py	68	51	52	39	11	8,21	2	1,49	134
XVI-Ur	77	54	52	36	14	9,79		0,00	143
XVII-Ar	73	54	47	35	14	10,37	1	0,74	135
XVIII-Br	63	50	49	39	8	6,30	7	5,51	127
XX-Ve	46	53	32	37	7	8,14	1	1,16	86
XXI-Ar	85	43	82	42	12	6,09	15	7,61	197
XXII-Ur	77	52	51	35	15	10,20	4	2,72	147
XXIV-Py	79	40	66	33	41	20,71	10	5,05	198
XXV-Ur	58	47	40	32	13	10,48	9	7,26	124
XXVI-Ch/Ar	128	57	59	26	31	13,90	3	1,35	223
XXVII-Br	70	45	55	35	21	13,38	8	5,10	157
XXVIII-Py	81	43	67	36	34	18,18	5	2,67	187
XXIX-Ur	66	37	96	53	16	8,89	2	1,11	180
Total	1681	45	1605	43	354	9,38	97	2,57	3776

Tabela 1 Participação social na REAF, conforme categorias, 2004-2018

Fonte: Elaboração própria a partir das listas de participantes nas sessões regionais da REAF Mercosul.

A diversidade na participação é visível pela grande variedade atores políticos que participam da REAF, que separamos em quatro categorias: i) as representações de governos; ii) os representantes de organismos multilaterais; iii) as organizações da sociedade civil; iv) demais organizações e observadores. Infelizmente não é possível listar todos os participantes dado o escopo do trabalho, mas são listados exemplos que seguem abaixo.

Entre os representantes de instituições governamentais há grande variedade de agências, de ação nacional e local, conforme o lugar em que é realizada a REAF. Destaco os representantes de Ministérios (MAG-Ministerio de Agricultura y Ganadería da Argentina; MDA-Ministerio de Desarrollo Agrario; MINAGRI-Ministerio de Agricultura, MAPA-Ministerio de Agricultura y Producción Agropecuária, etc.); secretarias vinculadas aos Ministérios (Secretaría de la Mujer do Paraguay, SEAD- Secretaria da Agricultura



Familiar do Brasil); as agências financeiras (Banco Central de Brasil, CAH-Crédito Agrícola de Habitación do Paraguay); as empresas de assistência técnica e extensão rural e de pesquisa agropecuária (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias do Uruguai, INTA-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria da Argentina, IPTA-Instituto Paraguayo de Tecnología Agrária , etc.); as agências de vigilância sanitária (ANVISA-Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, SENACSA-Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENASA- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria); entre outros (Câmaras de Deputados, Câmara de Senado, Presidência, Embaixadas, etc.). Entre os Ministérios de Agricultura dos países membros, destaco que mudanças institucionais na Argentina e no Brasil ocasionaram mudanças nas representações que participaram pelo MAGyP-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca/SAGPyA, posterior MINAGRO-Ministerio de Agroindustria e o MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário por representantes do MAPA-Ministério de Agricultura Abastecimento e Pecuária. As listas de presença evidenciam que a participação dos órgãos governamentais depende das dinâmicas políticas de cada país, que está relacionado às mudanças ou permanências dos governos nacionais ou mesmo as mudanças de grupos políticos dentro de um mesmo governo. Assim, a conjuntura política da região tem reflexo na REAF na medida em que esta é coordenada pelos representantes governamentais, portanto, trocas nas pastas dos Ministérios, Secretarias e Diretorias tendem a alterar os representantes que coordenam a REAF (Zimmermann et al, 2019).

Entre os representantes de organismos multilaterais, agências de cooperação e organizações intragovernamentais destaco a presença da FAO, FIDA, Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), GIZ-Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) do Paraguay, a Koica Korea-Agencia de Cooperación Internacional de Corea, a ONU Mulheres, a UNOPS-United Nations Office for Project Services ONU, o PTI-Parque Tecnológico ITAIPU; a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI); o Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC); Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); outras instâncias do Mercosul; Consejo Agropecuario del Sur (CAS), Frente Parlamentario Contra el Hambre (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana), etc. A FAO e o FIDA são instituições do sistema das Nações Unidas que têm significativa importância na estruturação e manutenção da REAF Mercosul. O FIDA contribuiu em projetos, seminários e recursos econômicos que resultaram na criação da REAF. A FAO entrou oficialmente na REAF em 2006, quando se comprometeu garantir apoio técnico. Já o IICA é um organismo internacional



especializado em agricultura vinculado à OEA-Organização dos Estados Americanos, que desde a década de 1990 é responsável pela assessoria técnica ao CAS e Ministérios de Agricultura na região. Entrou oficialmente na REAF em 2005 e tem papel múltiplo: gera conhecimento com pesquisas, publicações e capacitação; e assessora Ministérios de Agricultura da região (Sabourin et al, 2014:26).

Entre as demais organizações e observadores destaco representantes de universidades (UBA-Universidad de Buenos Aires, UDELAR-Universidad de la República Uruguay, UNILA-Universidad Federal de la Integración Latino Americana, etc.); ONGs e redes (DESER Brasil, REBRIP– Rede Brasileira Pela Integração dos Povos, RIMISP- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, WFFP- *World Forum of Fisher Peoples*, etc.).

Os dados evidenciam uma variedade de atores políticos implicados na REAF, sendo que alguns tiveram uma participação mais sistemática ao longo dos anos e outros tiveram participações pontuais, sobretudo quando os eventos ocorriam no país de origem dessas organizações e instituições governamentais. Na próxima seção destaco as organizações da sociedade civil que constam nas listas de presença da REAF, basicamente “o público” da agricultura familiar da região.

Que sociedade civil participa(ou) da REAF Mercosul?

Entre os participantes da sociedade civil a variedade é bastante ampla, sobretudo porque em função do país em que ocorre a REAF (ver Quadro 01), soma-se ao evento uma diversidade de organizações locais, mesmo que estas não tenham uma participação continuada posteriormente. Destaco a participação da Coprofam, que teve um papel fundamental na construção da REAF e participa sistematicamente de suas atividades, desde o primeiro evento em 2004. Esta rede de organizações sociais surgiu em 1994 a partir da preocupação dos impactos da consolidação de um mercado comum na região para a agricultura familiar (Carvalho, 2011). É composta por nove organizações em sete países e estima envolver quatro milhões de produtores familiares (Coprofam, 2019). São membros da Coprofam: a AMRU-Asociación de Mujeres Rurales de Uruguay, a CCP-Confederación Campesina de Perú, a CIOEC-Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas da Bolívia, a CNFR-Comisión Nacional de Fomento Rural do Uruguai, a CONTAG-Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura do Brasil, a FAA-Federación Agraria Argentina, o MUCHECH-Movimiento Unitario de Campesino y Etnias de Chile, a ONAC-Organización Nacional Campesina e a UAN- Unión Agrícola Nacional, ambas do Paraguai. A CNFR do Uruguai e a FAA da Argentina participaram no início dos anos de



1990 das reuniões do Mercosul (via Conasur), contudo por não se sentirem representadas nas pautas iniciaram a articulação com outras organizações da região (Carvalho, 2011). A composição da Coprofam é marcada pela presença de organizações sindicais (Silva, 2012).

Já foi comentado o papel da Coprofam na criação da REAF, contudo é importante esclarecer que nem todas as organizações, ou rede de organizações sociais do campo que atuam na região adotaram como linha política dialogar com o Mercosul logo em seu início. Este é o caso da *Via Campesina*, outra rede de organizações do campo que surgiu em 1993 e envolve 164 organizações oriundas de 73 países; destas 40 organizações são nos países latino-americanos (Via Campesina, 2017; Vieira, 2014). A *Via Campesina* não fazia parte das organizações presentes nas sessões regionais da REAF em seu princípio, mas nota-se que organizações e movimentos sociais ligados à *Via Campesina* participam de eventos da REAF em alguns países, como exemplo na Argentina (MNCI-Movimiento Nacional Campesino e Indígena) e na Bolívia (FNMCB-Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa). As mudanças na política regional dos anos de 2000, a inclusão da participação e controle social na pauta política contribuíram para um novo momento na relação da *Via Campesina* com a REAF, pois atualmente esta participa das sessões regionais da REAF, de forma não sistemática. Há cada vez mais um protagonismo das organizações da *Via Campesina* na REAF (Niederle, 2016: 23).

Anexo 1: Quadro 1

Nota-se que em todas as delegações encontrei participantes registrados como representante da Coprofam e/ou de AFCl-Organizações da Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, de forma genérica. Este aspecto traz a reflexão sobre a identidade dos participantes, as organizações e movimentos sociais a que estes estão vinculados, bem como as redes de organizações e movimentos. Assim, em determinado evento os participantes tem registro vinculado a sua organização ou movimento, enquanto em outros eventos aparece sua identidade coletiva, de rede de organizações. Estas identidades parecem ser acionadas conforme o evento, o local, a disponibilidade de vagas ou recursos conforme as instituições.

Em relação às redes de organizações que implicam o tema da agricultura familiar que participam da REAF identifique algumas de natureza nacional, por exemplo, a RENAF-Red Nacional de Agricultura Familiar e o FONAF-Foro Nacional de Agricultura Familiar e outras supranacionais ou globalizantes (Gohn e Bringel, 2014; Vieira, 2014), como a



Vía Campesina, a Coprofam, a ASA-Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de ALC, o FRM-Foro Rural Mundial e MAELA- Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe.

Considerações finais

O presente artigo mostra que o público da agricultura familiar, a partir das listas de presença da REAF, é equilibrado em relação a participação entre representantes da sociedade civil e governo. É, também, numeroso e bastante diverso em termos das categorias de representantes governamentais, organizações da sociedade civil, universidades e organizações multilaterais. Ao longo dos anos se verifica a ampliação no número das participantes na REAF. Entre os participantes existem aqueles que participaram em mais de um evento, contudo, constata-se que cerca de 3/4 do público participou apenas uma vez do evento. É reduzido o número de participantes (1%) que esteve presente em dez ou mais REAFs. De modo geral, o público na REAF alterna significativamente, contribuindo para difundir o debate sobre a agricultura familiar na região.

A REAF reúne um público bastante amplo e diverso de organizações e movimentos sociais da sociedade civil. É possível que algumas destas organizações e redes de organizações não se conheçam e que a REAF tenha sido uma oportunidade para ampliarem sua rede de relações, articularem ações locais e regionais. Um aspecto a salientar é a identidade dos participantes, que por vezes é registrada enquanto a organização ou movimento e, por outra, registrada como representando a rede de organizações ou movimentos. O público que participa da REAF representando os órgãos governamentais depende das dinâmicas políticas de cada país, que depende de mudanças ou permanências dos governos nacionais ou mesmo das dinâmicas dos grupos políticos dentro de um mesmo governo.

Por fim, observo que nas duas últimas sessões da REAF que ocorreram em 2019, em junho na Argentina, e em outubro-novembro no Brasil, foi perceptível a redução da participação dos representantes da sociedade civil, sobretudo decorrente do fim dos recursos do FAF. Há uma incógnita se os governos da região irão manter o Fundo, e em que condições. Em Buenos Aires a expectativa de público era menor do que se chegou ao final, devido o baixo orçamento disponível, e a participação foi bem expressiva, sobretudo das organizações da sociedade civil da Argentina. Em Chapecó o público da sociedade civil participante foi bastante restrito e contou com representante da CNA- Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e OCB- Organização das



Cooperativas Brasileiras, organizações que até então não participavam deste espaço, pois atuavam no CAS e na RECM-Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul. Embora os desafios colocados pelos novos governos à continuidade do Mercosul, e suas estruturas como a REAF, sobretudo devido às falas de representantes do governo brasileiro, não há uma sinalização de sua descontinuidade, mas sim parece estar em curso uma disputa em torno do público da agricultura familiar que participa dessa arena pública.



Anexo

	Nacional de Asociaciones Gremiales Campesinas de Chile; Confederación Nacional "EL TRIUNFO CAMPESINO"; Confederación Unida Obrero Campesina; Fundación PRODEMU; LEFTRARU-Asociación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas LEFTRARU A.G; MUCECH-Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile; EHUEN-Confederación Nacional Sindical Campesina e Indígena; NEWENCHE-Asociación Nacional Mapuche; RAN F.G-Red Apícola Nacional; RANQUIL-Confederación Nacional Sindical Campesina y Pueblos Originarios; UNAF-Unión Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Cooperativa; UOC-Unidad Obrero Campesino; VOZ DEL CAMPO-Confederación Nacional La Voz del Campo
Equador	Asociación Aguacatal de Abajo; Asociación Atara; Asociación de Campesinos Autónomos de las Comunidades de la Mediana, Capullar y Sandoval; Consejo de Pueblos Indígenas del Ecuador; Cooperativa La Indiana; Mujeres em Accion- Ecuador; Red de Organizaciones Campesinas y Comunas Unidas para un Buen Vivir; Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi
Paraguay	ACPCA-Asociación de Pequeños Agricultores de Caaguazú; Asociación Artesanas Yataity Poty; Asociación Curupicaty; Camara Supermercadas del Paraguay; Alter Vida –Ong; CEPACOOOP-Central Paraguaya de Cooperativas; CERI-Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios; CODIPAY--Comité de Agricultores; CODIPRAG-Comité de Agricultores; CODIPROQ-Comité de Agricultores; Comité NAF; Coop Aguaray; Coop Avati Poty; Coop. TRPLTDA; Cooperativa Concopar Paraguay; Cooperativa Manduvirá Paraguay; Cooperativa Moroti Paraguay; Cultiva-Organización Cultiva Paraguay de Comunidad; FECOPROD-Federación de Cooperativas de Producción; Federación Guarani; Nueva Alianza Organización de Comercialización Indígena; ONC-Organización Nacional Campesina; Organización Mainumby – Pueblos Originarios; Pastoral Social Nacional; UAN-Union Agrícola Nacional; Unión De Comunidades
Peru	CONVEAGRO-Convención Nacional del Agro Peruano; CCP-Confederación Campesina del Perú; CEPES-Centro Peruano de Estudios Sociales/ILC-Internacional Land Coalition
Uruguay	ACU-Asociación de Colonos del Uruguay; ALUR-Alcoholes del Uruguay S.A; AMRU-Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay; Asociación De Colonos; Asociación de Asociación Nacional de Productores de Leche de Uruguay Colonos de Uruguay; AUPC-Asociación Uruguaya de Productores de Cerdo; CAF-Cooperativas Agrarias Federadas); CCU-Centro Cooperativista Uruguayo; CNFR-Comisión Nacional de Fomento Rural de Uruguay; Colonos de Arerengú; CONAFPU-Cooperativa Nacional de la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos; COORPROCA-Coordinadora de Productores de Canelones; CUDECOOP-Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas; Federación Rural Del Uruguay; Fomento Basalto Ruta 31; Grupo Los Peques – Cardona; Interregional Productores de Leche; IPL-Intergremial de Productores de Leche de Uruguay; Las Delicias – Paysandú; Mesas de Desarrollo Rural (33, Cardona, Cerro Largo; Lavalleja, Paysandu, Rio Negro, Salto e Tacuarembó); MEVIR-Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) y la Junta Nacional de Empleo (JUNAE); Proquincel - Cerro Largo; Red Las Manos Hablan; Red Mujeres Rurales del Uruguay; Saupa – Salto; Sociedad de Fomento Guaviyú de Arapey; Sociedad Productores de Leche San Ramón Uruguay; Totoral del Sauce - Canelones; UNATRA-Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines
Venezuela	Comuna Tierra Fertil; Consejo Comunal La Falda; Programa Agrociudad; Vocero Comunal; Vocero Frente Ambientalista; Vocero Fundos Zamoranos
Otros	ACI-Alianza Cooperativas Internacional; ACTAF-Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales Cuba; ANTA El Salvador-Asociación de Trabajadores Agropecuarios; ASA-Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de ALC; Comunidad de Países Lengua Portuguesa – Mozambique; CONFRAS El salvador-Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña; Consejero Agrícola de España; ONG Fondo Verde; FRM-Foro Rural Mundial; MAELA-Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe; PDRR-Programa de Diálogo Regional Rural (Costa Rica e República Dominicana); RELASER- Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural; RIMISP; UNAG-Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua

Quadro 1 . Organizações da sociedade civil presentes nas listas de participantes da REAF entre 2004-2018

Fonte: Elaboração própria a partir das listas de participantes nas sessões da REAF Mercosul



Notas

¹ Agradeço o apoio do Edital PRPPG/UNILA nº 109, de 18 de outubro de 2017; e o apoio do CNPq, no âmbito da Chamada Universal MCTI/CNPq nº. 01/2016.

² Professora Adjunta da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Doutora de Sociologia em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2011). E-mail: silvia.zimmermann@unila.edu.br

³ Agradeço a colaboração da ex-bolsista CNPq, entre 2017-2018, Débora Fragata dos Santos que auxiliou no trabalho de registro na planilha do excel com presteza e dedicação.

⁴ A Venezuela foi considerada membro do Mercosul entre os anos de 2012 até 2016. Entre os anos de 2007 e 2016 consta nas listas de presença da REAF a participação de delegação venezuelana, sobretudo representantes do governo venezuelano (Ministérios).

⁵ Delegações de outros países eventualmente participam da REAF, por exemplo, África do Sul, Botsuana, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Moçambique, Nicarágua e República Dominicana.

Referências bibliográficas

Carvalho, P. D. (2011). Ação Coletiva Transnacional e MERCOSUL: Organizações da Sociedade Civil do Brasil e do Paraguai na Construção da Reunião Especializada Sobre Agricultura Familiar (REAF), Dissertação-UNB. Brasília.

Cefai, D. et Joseph. I(2002). L'Heritage du pragmatisme. Éditions de l'Aube.

Coprofam (2019). ¿Quiénes somos?. Recuperado: <http://coprofam.org/quienes-somos/> acesso em 20.11.2019

Dagnino, E.; Olvera, A.J.; Panfichi, A. (2006). A disputa pela construção democrática na América Latina. São Paulo: Paz e Terra; Campinas, SP: Unicamp.

González, L. D. C.; Mballa, L. V. (2017). Mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas en América Latina. Revista Políticas Públicas. vol.10(1).

Da Glória Gohn, M.; Bringel, B. M. (2014.). Movimentos sociais na era global. Petrópolis, RJ: Vozes.

Martins, J. R.; Silva, C. A. (2011). Políticas Sociais e Participação Social: a constituição de uma esfera pública regional no Mercosul. Boletim de Economia e Política Internacional IPEA, nº0 5, Jan./Mar.pg.66-71.

Niederle, P. (2016). REAF Mercosur: una década de coproducción de políticas públicas entre el estado y la sociedad civil. Porto Alegre: FAO.



- Pont, M. L (2018). Construyendo el mapa de la participación social en el
- Sabourin, E.; Samper, M.; Sotomayor, O. (2014). Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y El Caribe: balance, desafíos y perspectivas. Santiago, Chile: Cepal.
- Salcedo, S.; Guzmán, L. (Orgs.). Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. Santiago, Chile: FAO.
- Scherer-Warren, I.(2006). Das mobilizações às redes de Movimentos sociais. Sociedade e Estado, Brasília, v. 21, n.1, p. 109-130, jan./abr.
- Silva, C. A. (2012). Consolidação de uma Agenda para o Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Documento final. Brasília.
- Via Campesina (2017). Histórico e membros. Recuperado <<https://bit.ly/397RZTr>> em 18.04.2017.
- Vieira, F. B (2014). Articulações internacionais “desde baixo” em tempos de globalização. In: Da Glória Gohn, M.; Bringel, B. M. (2014.). Movimentos sociais na era global. Petrópolis, RJ: Vozes. p.189-210
- Von Bülow, M.; Carvalho, P. D (2012). Entre o nacional e o transnacional: o caso das organizações da agricultura familiar no Mercosul. In: Da Glória Gohn, M.; Bringel, B. M. (2014.). Movimentos sociais na era global. Petrópolis, RJ: Vozes. p.229-246
- Zimmermann, S. A. (2018). A construção de um público da Agricultura Familiar na América Latina: emergência e engajamento na REAF Mercosul. IN: Corrêa, D. S.; Chartain, L.; Cantu, R.; Leal, S. Crítica e Pragmatismo na sociologia – diálogos Brasil e França. São Paulo: Anna Blume. p.151-183
- Welp, Y. (2015). Las instituciones de participación ciudadana en América Latina (1978-2015). Washington, D.C.: SAP/OEA. Recuperado: <<https://bit.ly/3omt5pm>>



“Alguma coisa já está acontecendo”: Estado e sociedade na promoção dos direitos dos povos indígenas em Minas Gerais.

Maria Carolina Arruda Branco¹

Resumo

Os povos indígenas como sabemos, habitam as terras que hoje reconhecemos ser Brasil, muito antes deste país se consolidar enquanto tal (Carneiro Da Cunha, 2009). No Brasil, a pauta dos povos indígenas começou a ser mais recorrente a partir do século XX, com o que costumasse chamar de “indianismo brasileiro”; mas começa a se consolidar a partir dos anos 1970 (Cohn, 2015). Desde então as mobilizações indígenas têm sido cada vez mais recorrentes, fruto da organização destes povos na busca pela garantia dos seus direitos. Diante deste cenário, as relações socioestatais tornam-se essenciais na promoção de política pública e visibilidade da luta por direitos. Algumas organizações de caráter nacional que possuem uma centralidade neste processo contribuem para a organização política indígena. Elas compõem, juntamente com as agências estatais, a rede de política pública para os povos indígenas estendendo os horizontes em locais onde o Estado não chega, fazendo a defesa dos interesses indígenas, denúncias de situações que afetam a vida destes povos, bem como a veiculação e promoção de conhecimento indígena. Tratamos neste trabalho dos povos indígenas do estado de MG, recorte que abrange cerca de 12 etnias e 57 organizações que atuam localmente². Aborda-se a relação entre Estado e sociedade na promoção dos direitos dos povos indígenas, buscando evidenciar sobretudo a forma com que as organizações se organizam em rede para se mobilizarem em prol da garantia destes direitos. Optamos por investigar a solução do seguinte enigma sociológico: quais fatores fazem emergir uma rede interorganizacional atuante na proteção dos povos indígenas?

Palavras chave

Povos Indígenas; Organizações Cívicas; Minas Gerais; Rede Interorganizacional; Política Pública.

Introdução

Este trabalho começou a ser desenvolvido a pouco mais de 10 meses e teve como motivação responder o seguinte enigma sociológico: quais fatores fazem emergir uma rede interorganizacional atuante na proteção dos povos indígenas? Buscando meios para responder esta pergunta iniciamos uma revisão bibliográfica acerca do conceito de



organização civil. Tendo como recorte deste trabalho os povos indígenas de Minas Gerais, iniciamos uma busca na internet direcionada às organizações indígenas de MG evidenciando, quem são, onde estão, como atuam, o vínculo com qual etnia possuem.

Para este trabalho, concentramo-nos na discussão teórica acerca do conceito de sociedade civil e do conceito de Estado, bem como os desdobramentos que a discussão trouxe desde os jusnaturalistas até os teóricos contemporâneos. Esta é a discussão que inicia este artigo que se encontra subdividido o em mais duas partes e a consideração final.

A segunda parte desta discussão se concentra no conceito de Redes de Políticas Públicas e no conceito de Encaixe institucional e suas contribuições, atrelado a discussão de organização civil para pensar os laços construídos entre os sujeitos da sociedade civil e os agentes do Estado, na medida em que se compreendem enquanto atores interdependentes.

No último tópico, os esforços caminham no sentido de compreender, na vida prática dos sujeitos indígenas, como rede, sociedade civil e Estado, isto é, como toda esta discussão articulada fomenta a discussão da constituição de suas relações com o Estado. Considerando as organizações indígenas do Estado de Minas Gerais, e o estabelecimento das suas relações, analisamos de que maneira este cenário confirma e tensiona a teoria.

Ao final do trabalho é feita uma retomada da discussão apontando para os limites deste trabalho, bem como para os questionamentos que ficam e as possibilidades de avanços na teoria encontrados por nós.

Estado e Sociedade Civil: Avanços na discussão

O conceito de Sociedade Civil é um conceito antigo entre os pensadores da sociedade e da política. Ao longo do desenvolvimento do pensamento social e político este conceito assumiu vários significados, tornando-se um termo polissêmico. Sociedade civil é, no início, utilizada como sinônimo de sociedade política, pelos pensadores modernos, em especial os jusnaturalistas, para distinguir do estado de natureza.

Conforme o modelo jusnaturalístico da origem do Estado, que se repete, com sensíveis variações, mas sem alterações substanciais da dicotomia fundamental “Estado de natureza-Estado civil”, de Hobbes, que é seu criador, até Kant e seus seguidores, o Estado ou Sociedade civil nasce por contraste com o estado primitivo da humanidade em que o homem vivia sem outras leis senão as naturais. (Bobbio, 2007. p. 1206).



Após os contratualistas, Hegel teceu críticas importantes ao modelo proposto por eles. Argumentou que a sociedade civil é diferente do Estado e deve ser entendida como um termo intermediário entre a esfera privada da família e da sociabilidade natural. Kritsch (2014) aponta que os que antecederam Hegel, erraram em identificar na sociedade civil-burguesa à essência do Estado, ao invés de reconhecê-la como um momento inferior e subordinado ao Estado em sua plenitude.

A apresentação da proposta de Marx se distância da abordagem hegeliana na medida em que identifica a sociedade civil como a sociedade burguesa, que tem suas relações mediadas pela economia. Este fator econômico é marcante na obra de Marx que aponta ao Estado a incapacidade de ser um mediador, pois em sua configuração só pode ser compreendido como um instrumento de dominação e neste sentido "todo Estado é despótico e consiste numa ditadura de uma classe sobre a outra" (Kritsch, 2014. p.235). O autor permite uma inversão no modelo de primazia do político às demais esferas das atividades humanas, este lugar agora passa a pertencer à sociedade.

As mudanças não param, em Gramsci, a sociedade civil é conceituada de outra forma, partindo dos Estudos de Marx, Gramsci se afasta de suas conclusões à medida que assume que a sociedade civil será pensada em sua obra como superestrutura, isto é, a esfera em que age o aparelho ideológico da classe dominante. A sociedade civil é formada por um conjunto de órgãos que garantem a homogeneidade ideológica em relação ao sistema de valores da classe dominante. Os avanços que se encontra na discussão de Gramsci permeiam até mesmo a discussão do Estado, percebido enquanto a soma do consenso mais a força "a hegemonia é aquilo que vai promover durabilidade e conferir legitimidade à dominação" (Kritsch, 2014. p. 241).

Os anos 70 assistiu a emergência à ressignificação do conceito de sociedade civil sob a interpretação de Jürgen Habermas. A obra deste autor compreendia que no mundo real a reprodução não é tão material, ela se constitui fortemente no campo do simbólico, isto é, campo das ideias. O modelo teórico proposto por ele, e que orientou as análises de sociedade civil no Brasil ao longo dos anos 1970, 1980 e 1990, capta uma divisão em três categorias no mundo social, sendo elas: o mundo da vida, do mercado e do Estado. (Kritsch,2014).

O primeiro, perpassa a lógica da ação através da comunicação, se dá no plano argumentativo. O segundo, seria ditado pela lei da oferta e da procura, pelo próprio mercado e por fim, o terceiro, se constitui hierárquica e coercitivamente. Ou seja, para Habermas a sociedade civil é a esfera da vida, representante de um polo virtuoso,



diferente dos agentes perversos representados na figura do mercado e do Estado. As agências destas esferas são de ordem diferenciadas, a sociedade civil é o universo em que o social atua comunicativamente, sob a lógica do melhor argumento, na medida em que mercado age pelo interesse e o Estado pelo poder, sustentando suas ações por meio da força.

Esta visão habermasiana foi muito criticada por ter uma abordagem essencialista da sociedade civil. Pois visualizava na sociedade civil uma certa pureza em oposição ao polo negativo representado pelo Estado. A sociedade civil ao longo das décadas de 1980 e 1990 era tida de maneira essencialista, encarada como algo extremamente bom, positivo, que se opunha ao Estado e ao mercado, agentes, como visto acima, apresentados como perversos, que adquiriram um caráter negativo de representação e foram vistos como ruins (Silva, 2006).

Diante deste cenário, nota-se que a relação feita entre Estado e sociedade foi insuficiente pois não permitiu aos teóricos desta época observar a relação entre ambos nas suas entrelinhas. A quebra desta visão dicotômica surge com a perspectiva relacional, que bem lembra os autores Moura e Silva (2008), não é apenas institucional, a partir dela se tornou possível apreender padrões mais complexos de relação. As redes de políticas revelam que os padrões de aliança podem estar configurados de maneiras que não se imaginava, apesar dos interesses particulares os indivíduos são capazes de se articular em conjunto para interesses coletivos.

O trabalho de Marques (1999) é um exemplo da aplicação desta estratégia. Analisando a rede de políticas públicas do saneamento básico no Rio de Janeiro, o autor encontrou laços que tornavam as fronteiras do Estado e da Sociedade levando a formulação do conceito de permeabilidade. Os padrões de interações observado pelo autor revelou que o posicionamento dos atores na rede estudada foi um fator importante que permitia pequenas empresas e empresas "honestas" a vencerem licitações com o Estado. Deste modo, contrariou o argumento amplamente aceito de que as grandes empresas ou aquelas envolvidas em redes de corrupção venciam a maioria das licitações.

Mostrou-se necessário abolir esta visão muito simplista de encarar a sociedade civil sob um prisma maniqueísta; hoje, a partir de um enfoque processual e relacional, a sociedade civil, é, assim, "uma esfera de interação social diferenciada da economia e do Estado, composta de três parâmetros analiticamente distintos: pluralidade, publicidade e privacidade" (Moura; Silva, 2008. p.45)



Esta perspectiva essencialista levou a pelo menos 4 falácias sobre a sociedade civil no Brasil, como as que Lavallo e Szwako (2015), discutem acerca das abordagens de Avritzer. Neste texto, os autores contestam as abordagens feitas por Avritzer na busca de evidenciar que a sociedade civil não é um bloco monolítico e que entre ela e o Estado existem extensas possibilidades de relações. Destas falácias, mais adiante, tocaremos no que compete, especialmente, à afirmação de que a emergência da sociedade civil, no Brasil, tenha sido tardia.

Segundo a argumentação de Lavallo e Szwako (2015) deve haver uma desmistificação da sociedade civil como boa e totalmente autônoma pois a relação entre Estado e sociedade civil é fruto da autonomia e interdependência entre ambos. Em sua abordagem as duas partes deixam de ser vistas como pares de oposição e passa-se a destacar as relações socioestatais marcada pela cooperação entre elas.

Em alguns casos, os atores não estatais atuam por dentro do Estado e dos partidos, através das instituições participativas ou, mesmo, a despeito delas; já em outros, não tão raros como de praxe se imagina, militantes tornados autoridades ou as próprias autoridades passam a promover uma espécie de ativismo institucional do Estado. São, pois, diversas as combinações e rotas de interdependência entre Estado e sociedade civil, do mesmo modo que são variadas as categorias analíticas mobilizadas para dar conta do cenário de intensificação e ampliação das trocas socioestatais.[...] As ricas transformações sociopolíticas ocorridas nas últimas duas décadas demandam interpretações baseadas em categorias relacionais, de médio alcance e menos preocupadas com resguardar alguma essência virtuosa dos atores da sociedade civil (Lavallo, 2015. p. 181-182).

Haja vista que para o estudo das relações entre Estado e sociedade civil, percebe-se a necessidade da atenção à análise de rede de políticas públicas. No próximo subtópico apresenta-se o conceito de redes de políticas públicas articulado à noção de encaixe institucional.

Redes de Políticas Públicas e o conceito de Encaixe Institucional

As novas configurações de políticas públicas não pertencem a discussão exclusiva de uma "hierarquia governamental e administrativa integrada" (SCHNEIDER, 2005. p.37), mas sim de uma rede de políticas que permitem um intercâmbio e uma troca, espaço em que os atores compartilham e disputam os recursos e isto envolvem organizações privadas assim como organizações públicas. Redes de políticas públicas representa, desta maneira, uma nova forma de governança, que altera a relação Estado e



Sociedade constituindo interações entre diferentes atores responsáveis por estabelecer cooperações de diferentes níveis entre eles.

Os estudos sobre redes de políticas públicas apontam que elas incorporam atores distintos, tanto da sociedade civil quanto políticos, no processo de sua produção, ou seja, são manifestações macroestruturais de sistemas políticos, nas quais os interesses sociais e políticos estão integrados (Schneider, 2005). As redes de políticas públicas estariam desta forma em oposição ao modelo tradicional, em que as políticas eram prerrogativas exclusiva do Executivo e do Legislativo, neste contexto as políticas públicas elas são vistas, segundo Schneider, como uma reação ao aumento da jurisdição da política estatal.

Através desta perspectiva as redes de políticas públicas são encaradas como uma nova forma de condução política que reflete uma relação modificada dos atores sociais com o Estado. Os atores estão cientes sobre os seus interesses, o que os permite negociar.

O conceito de “encaixe institucional” (Carlos; Dowbor; Albuquerque, 2017) nos ajuda a dar uma amarrada nesta discussão, ele diz respeito ao momento em que atores conseguem acessar o Estado influenciando-o de maneira decisória no processo de políticas públicas. Os atores (sociedade civil), para acessarem este espectro das relações precisam ter encaixes que são justamente o acesso e a influência sob Estado, os sujeitos que não possuem estes encaixes institucionais certamente terão menos chance de fazer valer seus objetivos.

A argumentação dos autores (Carlos; Dowbor; Albuquerque, 2017) é construída apoiada na abordagem da polis, através dela é possível notar duas questões, a primeira acerca dos interesses próprios de gestores e a segunda a existência de independência dos atores sociais.

As duas questões explicitadas interagem entre si criando possibilidades, no entanto é a segunda que contribui para a discussão dos “encaixes institucionais”, pois ela abre margem à permeabilidade do Estado, que possibilita o momento de interferência dos atores nos processos decisórios de políticas públicas. Os resultados das ações coletivas nas políticas públicas permitem alterar situações específicas, apesar de envoltas em questões institucionais mais amplas.

Este momento de encaixe institucional é o que momento que contribui para a nossa compreensão desse movimento em conjunto entre Estado e sociedade civil, pois revela-se escancarada a interindependência entre eles. As discussões apresentadas até o



momento tornam evidente as transformações que o conceito de sociedade civil sofreu ao longo do tempo e explicita como Estado e sociedade civil estão entrelaçados em Redes. Como observamos a sociedade civil não é um bloco único, da mesma forma que Estado não o é, há interesses diversos em conflito nos seus “bastidores”, interesses estes tanto coletivos como individuais.

As organizações civis dentro da esfera pública cooperam entre si e com as agências estatais também, uma articulação necessária quando compreendemos que as partes precisam cooperar minimamente entre si para ganhos coletivos advindos das políticas públicas. Uma vez que o Estado não consegue garantir a implementação de políticas públicas a todos os sujeitos e a solução de todos os problemas públicos, ele precisa da sociedade civil; da mesma forma que a sociedade civil precisa do Estado sendo ele a entidade que controla os recursos relevantes que possibilitam as organizações realizarem suas atividades fins. Ambos, desta forma, precisam cooperar entre si, o Estado fornece recursos às demandas da sociedade civil e ela por sua vez reconhece o Estado legitimando as suas ações. O que se apresenta é uma cooperação mútua. A fronteira entre Estado e sociedade civil é permeável.

Redes, Sociedade Civil e Estado: a questão indígena em Minas Gerais

Registra-se que apenas no início do século XX surgiu a primeira política do Estado brasileiro voltada efetivamente para os povos indígenas. Tratou-se da criação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), órgão que tinha por orientação dar “amparo” aos indígenas do Brasil (Ribeiro [1970]1996), neste momento já se observa uma primeira relação entre os indígenas e o Estado. Submerso em denúncias de corrupção o SPI atuou até 1966, quando foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI (Carneiro Da Cunha, 2009).

A interação dos indígenas no Brasil com o Estado, na figura do SPI, se constituiu antes da década de 1970, como por exemplo, Davi Kopenawa (Kopenawa; Albert, 2015), indígena Yanomami, relata em seu livro, em que o contato com os não índios se deu de diversas formas. Este contado que foi a princípio entendido pelos indígenas como possibilidades de trocas e que posteriormente tomado por outra perspectiva, passou a ser considerado uma ameaça, haja vista as doenças que este contato proporcionou aos indígenas daquela etnia

Ailton Krenak em depoimento no ano de 1984, aponta que “os indígenas que habitam este país sempre se organizaram, mas foi ao final de 1970 quando passaram a se encontrar e perceber os problemas em comum é que começaram a encaminhar algumas



soluções junto” (Cohn, 2015. p.25). As falas destas lideranças indígenas nos fazem pensar ao passo que tensionam a teoria que afirma que a sociedade civil indígena seria datada da década de 70.

A bibliografia indica que o movimento indígena emerge, como um movimento social de caráter étnico com o surgimento, estruturação e organização do movimento no Brasil marcado por 5 acontecimento, segundo Bicalho (2019): “as Assembleias Indígenas, o Decreto de Emancipação de 1978, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987/ Constituinte de 1988, as Comemorações dos 500 anos do Brasil e o Abril Indígena/ Acampamento Terra Livre, já no século XXI” (p.137).

O período entre 1986 e 1988, processo de constituinte, foi o momento de efervescência do surgimento das organizações indígenas no Brasil. O reconhecimento, na Constituição de 1988, no que se refere à organização dos povos indígenas, resultou no surgimento e na “multiplicação de organizações indígenas pelo país afora e sua articulação em redes regionais, nacionais e inclusive transfronteiriças” (Verdum 2009, p. 100), este cenário também proporcionou maior visibilidade às pautas indígenas e um fortalecimento das organizações que já tinham se consolidado.

Em meio a este contexto, a partir da década de 1970, inicia-se um período de intensificação das relações socioestatais no campo da promoção dos direitos dos povos indígenas. Muitas organizações se constituem para a proteção e promoção dos direitos indígenas. Algumas delas de caráter nacional, são elas: o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), o Centro de Trabalho Indigenista (CTI), a Associação Nacional de Ação Indígena (ANAÍ), a Operação Amazônia Nativa (OPAN), o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), o Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI). E atualmente uma que se destaca é o Instituto Socioambiental (ISA). Estas organizações desenvolvem papel fundamental contribuindo para os diversos modos de organização política indígena. Elas conformam a rede de políticas públicas para os povos indígenas estendendo os horizontes em locais onde a FUNAI não chega. Passaram a atuar como intermediários, fazendo a interlocução entre indígenas e órgão público, a defesa dos interesses indígenas, denúncias de situações que afetam a vida destes povos, bem como a veiculação e promoção de conhecimento indígena.

Em Minas Gerais destacam-se três organizações: o Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais (COPIMG), O Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva – (CEDEFES) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI). Segundo o Marco de Referência dos Povos Indígenas em Minas Gerais (2009) essas organizações são



responsáveis pelos espaços de discussões acerca das questões indígenas no estado. Por exemplo, elas realizam anualmente a Semana dos Povos Indígenas, evento realizado em Belo Horizonte, que reúne as principais lideranças indígenas do Estado.

Acerca das organizações indígenas no Estado de Minas Gerais, identificamos que elas são 43 organizações de caráter local, em 17 municípios diferentes havendo 13 etnias indígenas que ocupam esse território, e elas estão dispersas pelo Estado. Com esta afirmação, explico uma errata em relação ao resumo submetido neste evento, esta pesquisa continuou a ser realizada e a partir desta continuidade faço essas devidas atualizações acerca da quantidade de etnias no estado, bem como o número de organizações presentes em Minas Gerais. A maioria das organizações que localizamos possuem CNPJ, e atuam em frentes tais como garantia do acesso à terra, saúde indígena, mulheres indígenas, preocupadas com a comunidade e suas demandas.

Para além de constituir suas organizações, a necessidade de uma atuação em rede tem sido reconhecida pelos indígenas, na figura de Ailton Krenak quando reconhece que as populações indígenas podem estabelecer formas de cooperação efetiva. Deste modo, espera-se emergir dessa cooperação redes de organizações indígenas. Além da rede interna, a questão indígena perpassa a articulação com o Estado, o movimento indígena visualizou esta necessidade de cooperar entre si e com os povos a sua volta, estabelecendo desta forma uma articulação em prol dos interesses em comuns que possuem:

Nossas relações com o Estado passam por um conjunto de ritos hereditários, em que o Estado monopoliza o contato e depois começa a preservar a bola para outra classe de gente; o Estado de certa maneira controla o tempo inteiro, porque nós não saímos da relação com ele para conversar com a sociedade civil. Quando se tem uma década de contato com os brancos, ele fica praticamente restrito aos agentes do Estado, porque você não fala a língua portuguesa, ainda está sob controle de endemias. Há os surtos de gripe e de malária; a área ainda está isolada. Passa-se uma década em alguns casos, e você avança esses contatos. Começa sua percepção de Brasil. Hoje existe uma organização indígena que antecipa articulações com a sociedade civil. Já se formou uma visão crítica dessa sociedade civil em relação àquele contato e há a disposição de aliança, mesmo que os parentes arredios não tenham ainda conhecimento disso. Essa novidade coloca a organização indígena como a vanguarda da defesa do nosso interesse e do nosso povo (Cohn, 2015. p. 99).

Nesta citação Ailton aponta para uma relação dos indígenas com a sociedade civil, e não os coloca, [eles] povos indígenas, também enquanto um grupo da sociedade civil,



para este trabalho localizamos as organizações indígenas também como sociedade civil. Embora compreendamos o que significa esta separação entre a sociedade civil e as etnias indígenas em um momento de início de relação com o não índio, que neste caso é a sociedade civil, bem como com o Estado, evidenciado na fala de Ailton. Segundo sua fala, a relação com o Estado já estava de alguma maneira encaminhada, através dos seus agentes.

É importante observar como os dois polos do debate sobre a sociedade civil (abordagem essencialista x abordagem relacional) se misturam, neste apontamento de Ailton, percebe-se uma tensão proporcionada pela sua fala à bibliografia utilizada acerca do surgimento da sociedade civil no Brasil e aqui em especial à sociedade civil indígena.

No que se refere ao contato estabelecido e às multifaces da relação, na visão da liderança indígena, ora compreende as relações com a sociedade civil como uma coisa boa, ora não. Ele explicita que eles já possuem uma crítica à sociedade civil, ou seja, há o reconhecimento de que os sujeitos possuem interesses diversos, assim como a sociedade civil também possui seus interesses e que logo não é um ente dotado de virtude, não é boa em sua essência. Mas que mesmo diante disso há uma “disposição de aliança” com esta mesma sociedade civil, porque esta é plural formada por grupos diversos de pessoas, com posições e interesses diversos.

Nesta mesma fala, ele aponta a relação com o Estado a partir de uma perspectiva do Estado controlador, monopolizador etc. características ruins a princípio. No entanto, assim como a sociedade civil não carrega esta áurea de um ente dotado de bondade infinita, o Estado também não se mostra como este ente cruel, nesta mesma noção maniqueísta discutida na primeira sessão deste artigo.

O Estado não adota somente esta postura de um órgão ruim, ele revela-se em algumas situações aberto ao diálogo, permitindo que haja a troca e o intercâmbio de ideias que permitem com que sociedade civil, e aqui, especificamente, aos povos indígenas, interferirem diretamente nas políticas públicas, como aconteceu com o próprio Ailton, no ano de 2003, em que ele foi vinculado à Secretaria de Governo de Minas Gerais, do então Governador na época, Aécio Neves, com o cargo de “assessor especial para assuntos indígenas” (Cohn, 2015, p. 214).

No Estado de Minas ao que se apresenta os povos indígenas na figura de Ailton alcançou uma relação de outra ordem com o Estado para além da figura de uma



instituição ruim. Outro momento que o encaixe institucional se apresenta de maneira grandiosa é com o projeto Minas Indígena.

As interações Estado e sociedade civil, neste projeto é guiado pelo objetivo de eliminar a carência por moradia para a população indígena no Estado de Minas Gerais. A agenda deste projeto pretende alcançar nove objetivos “erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, redução das desigualdades, comunidades sustentáveis, ação contra a mudança global do clima, parcerias e meios de implementação”

Neste cenário atores estatais e sociais circulam no mesmo espaço de interesse, nos moldes da primeira discussão tratada neste trabalho, em relação de interesses que cooperam entre si. Este ponto nos fica evidente quando no próprio site do projeto é apontada esta interação como um “eixo estruturante” do trabalho:

[o projeto³] Assentando-se em cinco eixos estruturantes contempla: a união entre as três esferas de governo; o processo participativo dos nativos no desenvolvimento do Projeto; a aproximação entre o Poder Público e a Academia via inserção de estudantes universitários em todas as ações; a capacitação dos nativos para a execução das obras permitindo a eles a obtenção de conhecimento técnico para a autoprodução e replicação correta e, sustentabilidade social, econômica e ambiental.

Este projeto envolve Governo Federal, Estadual e Municipal e as comunidades indígenas, como apontado acima participam do desenvolvimento do projeto, um momento de interação social que envolve todo a discussão do enfoque relacional ao qual Estado e sociedade civil são autônomos e interdependentes. É neste momento que ocorrem os encaixes institucionais, é neste ponto que se apresenta a permeabilidade do Estado, o momento de interferência dos atores sociais para a construção de políticas públicas.

Justamente neste momento é que os resultados das ações coletivas nas políticas públicas aparecem, no exato momento em que os sujeitos envolvidos no processo interagem para a efetivação de uma política pública que muda as suas vidas e a realidade dos seus. E isso só é possível por que diferente do que se pensa, o Estado é multifacetado e por ser multifacetado não é necessariamente o mesmo em todos os lugares.

Há entre os sujeitos indígenas a dimensão de que impactam o todo a sua volta de diversas maneiras e por estarem cientes disso trabalham em rede, construindo laços e



alianças entre organizações indígenas, com outros atores da sociedade civil e com o Estado, fica evidente esta ação na fala de Ailton em uma entrevista em 2013:

Essa experiência de rede, eu fui sacando na minha cabeça essa dinâmica de rede antes de existir essa coisa de web. Eu já experimentava a atuação em rede, porque sabia que estava no Brasil, no Mato Grosso, mas tinha um cara lá na Holanda que não falava português, nem eu holandês, mas que sabia que eu estava fazendo aquela trajetória e ele estava divulgando aquilo. Eu tinha certeza que ele estava fazendo isso, e que aquilo resultava em potência para o que eu estava fazendo. Isso é rede (Cohn, 2015. p.251).

Esta organização que se constrói em rede com outros grupos da sociedade civil, vai ao encontro da questão de localizar sujeitos com interesses congruentes aos seus ou que os apoiam na mobilização pela garantia dos seus direitos. Diversos fatores fazem emergir laços entre os sujeitos indígenas e não indígenas, o que nos impulsiona a questionar quais os interesses desses sujeitos da sociedade civil que estão ao lado deste setor organizado dos povos indígenas? Da mesma forma que a pergunta inversa é válida, quais os interesses destes indígenas em estabelecer relações com outros sujeitos da sociedade civil? Algumas respostas veem à mente, mas que deixaremos como direcionamento para conclusão do desenvolvimento deste trabalho.

Considerações Finais

Para este artigo concentramo-nos na discussão acerca da sociedade civil e como este conceito, ao longo do tempo, foi sendo modificado e que ainda hoje é o centro da discussão para se pensar a interação dos sujeitos com o Estado, os mecanismos que precisam ser mobilizados para que esta relação ocorra de maneira a agregar para ambas as partes.

O conceito de Rede de Políticas Públicas e Encaixe Institucional também foi alvo da discussão sendo os principais mecanismos que possibilitam à sociedade civil alcançar o Estado e neste movimento, que é conjunto, um dá sustentação ao outro, evidenciando suas interdependências.

Apoiando-nos na discussão com os povos indígenas encontramos alguns pontos que fomentam o debate acerca do surgimento da sociedade civil no Brasil. Para este artigo não conseguimos avançar nesta discussão que estamos levantando no decorrer da pesquisa.

Já examinamos outras relações dos indígenas em Minas Gerais com o Estado, tais como as vagas em universidades públicas do Estado de MG, os grupos de estudos



sobre estas populações em Minas Gerais, as candidaturas de indígenas a cargos públicos no Estado de MG, as próprias organizações indígenas de caráter local e como estas se articulam, discussão que não encontramos espaço para desenvolver neste artigo. De toda forma fomentamos o debate acerca das maneiras com que estes povos indígenas, através dos encaixes institucionais procuram afetar as políticas públicas que os afeta, questão que estruturou nosso direcionamento do olhar.

Notas

¹ Universidade Federal de Alfenas-MG, Graduanda em Ciências Sociais, marrudabranco@gmail.com.

² Acerca deste ponto, na página 9 deste artigo, explicito uma errata.

³ Acesso em 27 de maio de 2019, Disponível em: <https://www.minasindigena.mg.gov.br>.

Referência Bibliográfica

Bicalho, Poliene. (2019). Resistir era preciso: O decreto de emancipação de 1978, os povos indígenas e a sociedade civil no Brasil. *Topoi (Rio J.)*, Rio de Janeiro, Brasil: v. 20, n. 40. 136-156.

Bobbio, Norberto. (2007). Dicionário de política. 13. ed. Brasília, Brasil: Ed. da UNB, v.2.

Branco, M.C.A.; Vitória, H. O.; Carbono, J.C. (2018). Organizações civis pelos direitos dos povos indígenas em Minas Gerais. In: III Jornada de Ciências Sociais da Unifal-MG, 3., 2018. Alfenas-MG. *Anais...* Alfenas, Brasil. 266-278.

Carlos, Euzeneia; Dowbor, Monika; Albuquerque, Maria do Carmo. (2017). Movimentos Sociais e seus efeitos nas políticas públicas. *Civitas*, Porto Alegre, Brasil: v. 17, n.2. 360-378.

Carneiro Da Cunha, Manuela (Org.). (2009). História dos índios no Brasil. São Paulo, Brasil: Ed. Companhia das Letras.

Cohn, Sergio (org.). (2015). Ailton Krenak. 1. ed. -Rio de Janeiro, Brasil: Azougue.

Estado De Minas Gerais Secretaria De Estado De Planejamento E Gestão. (2009). Marco de Referência Povos Indígenas em Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

Kopenawa, Davi & Albert, Bruce. (2015). A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo, Brasil: Companhia das Letras.

Kritsch, Raquel. (2014). Estado e Sociedade Civil na Teoria Política: alguns paradigmas, muitas trajetórias. *Política & Sociedade- Florianópolis*, Brasil- Vol. 13- Nº 28. Doi: <https://doi.org/10.5007/2175-7984.2014v13n28p225>



Lavalle, Adrian Gurza; Szwako, José. (2015) Sociedade civil, Estado e autonomia: argumentos, contra-argumentos e avanços no debate. *Opinião Pública*, Campinas, vol. 21, nº 1, 157-187.

Lopez, Felix Garcia (Org.). (2018). *Perfil das organizações da sociedade civil no Brasil*. Brasília, Brasil: Ipea.

Marques, Eduardo Cesar. (1999) Redes sociais e instituições na construção do Estado e da sua permeabilidade. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 14, n. 41, 45-67.

Moura, Joana Tereza Vaz de.; Silva, Marcelo Kunrath. (2008). *Atores Sociais em Espaços de Ampliação da Democracia: as redes sociais em perspectiva*. Ver. *Sociol. Polít.*, Curitiba, Brasil: v. 16, número suplementar, 43-54.

Prezia, Benedito. (2017). *História da resistência indígena: 500 anos de luta*. São Paulo, Brasil: Expressão Popular.

Putnam, Robert D. (2006). *Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna*. 5 ed. Rio de Janeiro, Brasil: Editora FGV.

Ribeiro, Darcy. (1996). *Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno*. São Paulo, Brasil: Companhia das Letras.

Schneider, Volker. (2005). *Redes de Políticas Públicas e a Condução de Sociedades Complexas*. *Civitas- Revis/ta de Ciências Sociais*, v. 5. n. 1. Doi: <http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2005.1.33>

SILVA, Marcelo Kunrath. (2006). *Sociedade civil e construção democrática: do maniqueísmo essencialista à abordagem relacional*. *Sociologias*, Porto Alegre, Brasil, ano 8, nº 8, 156-179.

Verdum, Ricardo. (2009). *Povos Indígenas no Brasil: o desafio da autonomia*. In: *Povos Indígenas: constituições e reformas políticas na América Latina*. Ricardo Verdum (Org.). Brasília, Brasil. Instituto de Estudos Socioeconômicos.



El Estado hacia la tangente: Mujeres objetos de políticas públicas con marco normativo.

Programa Red de Salas Cuna (Córdoba- Argentina).

Nerea Lucrecia Jodor¹
Juan Lenardon²
Karim Milena Stegmayer³

Resumen

Desde el año 2016 el gobierno de la provincia de Córdoba (Argentina) ha puesto en marcha dentro del territorio provincial el Programa Red de Salas Cuna. Éste formula dos objetivos complementarios: por una lado, contribuir al desarrollo psico-social de los niños y niñas; y por otro, asistir a la mujer dando la tranquilidad del cuidado y contención de sus hijos mientras trabaja o asiste a la escuela, contribuyendo así a la inserción social y laboral de las mujeres. Acción estatal que muestra un compromiso con la difusión, promoción y garantía efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, tangencialmente, de las mujeres. El programa garantizado legislativamente en el año 2018 (Ley N°10533), establece que tales centros de atención gratuita son gestionados por personas jurídicas públicas y/o privadas sin fines de lucro de la sociedad civil. De esta manera nos proponemos contextualizar social, económica y políticamente desde una perspectiva teórica interseccional: la creación y ejecución del programa; utilizando una metodología de análisis narrativa histórica sobre un conjunto variado de datos cuantitativos y cualitativos. Permitiendo describir qué tipo de roles sociales femeninos se ven beneficiados y fomentados por el estado en forma individual; al tiempo que establecerá cuál perfil tienen las organizaciones sociales que efectivizan en el territorio dichas medidas. Los datos utilizados y presentados forman parte del universo de análisis de una investigación colectiva más amplia sobre la evaluación de programas sociales con marco normativo subsidiado por la SECyT (UNC-ARG).

Palabras clave

Políticas públicas con marco normativo; Organizaciones no gubernamentales; Mujeres; Contextualización.

Introducción

Habitualmente las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas por las que atraviesa una sociedad definen qué es lo urgente y qué no. Estos marcos de posibilidad, de alguna manera establecen las condiciones en las cuales el Mercado, Estado y



Sociedad Civil interactuarán entre sí dentro de un espacio y tiempo determinados (Tarrow, 2008).

Siguiendo la ya clásica propuesta de Cohen y Arato (2000), sostenemos que el Estado, Mercado y Sociedad Civil interactúan entre sí, oscilando entre el espacio público y privado. Dicha interacción, aquí será considerada como dialéctica ya que los mencionados actores sociales pueden adoptar diferentes posturas que por un lado forman parte de las condiciones contextuales; y por la otra se ven condicionadas por el contexto.

Desde allí hemos concebido al Mercado como un conglomerado de fuerzas mercantiles internas y externas a los espacios nacionales, que pueden materializarse en la vida cotidiana como empresas, grupos inversores, bancos y financieras, mercadotecnia, entre otras tantas formas. Este tipo de actores poseen una fuerte influencia en la determinación de las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas por las que atraviesa una determinada sociedad, sin sufrir mayores sobresaltos sobre sus propias condiciones ya que son parte activa de la lógica capitalista imperante. Al tiempo que determinan las condiciones materiales de vida de las personas, familias, y conglomerados sociales.

En segunda instancia para esta investigación el Estado fue comprendido desde una mirada clásica; es decir como una organización humana y política en la cual existe un orden social y jurídico, legal y legítimo establecido por la comunidad para sí misma y su prosperidad (población) dentro de un territorio dado. Nuestro país (Argentina) ha adoptado constitucionalmente la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Existiendo un gobierno central – nacional; y otro descentralizado que se divide en provincias y municipios. A su vez cada uno de estos gobiernos poseen una división tripartita del poder público: Poder ejecutivo (PE); Poder Judicial (PJ) y Poder Legislativo (PL) que se ocupan de ordenar la vida en sociedad y dar satisfacción a cada uno de los requerimientos ciudadanos.

En este sentido nos interesaba contextualizar el accionar del Poder Ejecutivo Cordobés en relación al Programa Red Provincial de Salas Cuna. Precisamente porque es este órgano estatal quien pone en marcha las políticas y programas públicos mediante una particular forma de trabajo que incluye diversos actores sociales pertenecientes a las esferas mercantiles y de la sociedad civil.

Por ello haremos especial hincapié en la conducción política de dicho órgano, ya que es ella quien adopta un plan de gobierno más o menos paternalista, intervencionista,



garantista, e incluso puede llevar adelante acciones que impliquen una gran presencia estatal dentro del espacio público. O bien por el contrario, adoptar y fomentar políticas neoliberales beneficiosas para el mercado y perjudiciales para la sociedad civil en su conjunto. En este sentido vale destacar que por la influencia de factores internos y externos que hacen a los contextos de acción latinoamericanos, nuestros gobiernos difícilmente han logrado asumir posiciones intermedias en las cuales de manera equitativa se sustenten entre los actores los riesgos de la vida cotidiana.

Siguiendo esta línea de trabajo estatal, necesariamente podremos atención sobre el accionar de la Sociedad Civil cordobesa. Categoría que denotaba un espacio social en el cual se aglutinan individuos, colectivos, organizaciones, asociaciones civiles, fundaciones, movimientos sociales, y todo tipo organizacional que no se encuentre dentro de la faz estática de “lo político”, pero interactué con ello. Estos actores también adoptan posiciones más o menos activas dentro del escenario público-privado, así por ejemplo muchos colectivos y organizaciones levantarán estandartes por el reconocimiento de ciertos derechos acordes con los principios y valores que sostienen. Identificando dentro de la arena pública a sus adversarios, quienes pueden integrar cualquiera de las esferas- actores mencionados (sociedad civil, estado, mercado).

Contextos, políticas y programas públicos

De manera general, para nuestro continente nuestras sociedades civiles han sido caracterizadas por su fuerte capacidad de organización para la solución colectiva de las problemáticas que la aquejan. Siguiendo a Domingues (2009) la facilidad para movilizarse que caracteriza a las sociedades civiles latinoamericanas se basa en un principio de solidaridad colectiva. Asimismo de manera complementaria y hasta folclórica las organizaciones de la sociedad civil muchas veces se ven expuestas a estrategias de cooptación política.

Para contextualizar una política pública se debe tener en cuenta la historicidad de una sociedad dada, ya que sus características establecen el diseño, creación, y puesta en marcha de aquellas. Con esta intención haremos una breve reseña del contexto anterior y concomitante a la creación del programa.

Las referidas características de nuestras sociedades civiles, fueron acrecentadas durante los noventa latinoamericanos. En tal periodo el continente fue gobernado a través de proyectos políticos de corte neoliberal que terminaron provocando una serie de crisis sociales, económicas y políticas en los diferentes estados del continente.



Argentina no fue ajena a tal situación, por el contrario el malestar que daría lugar al histórico estallido social del año 2001.

Particularmente para la Provincia de Córdoba no fue un periodo fácil. Nuestro espacio social del que somos parte y sobre el cual trabajamos como investigadores para finales de los noventa se encontraba enfrentada con el Estado Nacional debido a la crisis económica y al igual que el resto del país hacia su interior sufría una crisis social y política que se desataría en diciembre de 2001.

Hasta aquel momento la Provincia ubicada en el centro del país, había sido gobernada por el radicalismo, quien a causa del descontento social con el gobierno provincial y nacional del mismo signo perdería las elecciones. Desde ese entonces y hasta la actualidad la administración provincial ha sido conducida por la misma fuerza política: el Justicialismo Cordobés; grupo político que a través de los años ha logrado mantener la gestión provincial bajo su tutela utilizando diversas estrategias. Sin ir más lejos, en las últimas elecciones celebradas durante el año 2019, el partido gobernante obtuvo la victoria con un 57,28% de los votos con una participación del más del 75% de la población, logrado renovar la conducción de la gestión provincial. ¿A qué se debe esta conformidad de la ciudadanía con la gestión estatal?

Pues bien, primigeniamente durante la primera gestión (1999-2003) el Estado provincial se encontraba enfrentado al gobierno nacional, y endeudado con los empleados públicos pertenecientes al sector educativo y de salud. A ello se sumaba una sociedad civil con escasos recursos y empobrecida por la fuerte crisis económica que se avecinaba. Dentro de tal panorama previo y concomitante a la crisis (2001), el gobierno provincial puso en marcha tres estrategias que con el correr de los años permitirían su permanencia:

La primera fue la reforma del estado provincial, creando agencias antes que secretarías. Éstas estaban integradas por sectores y fondos públicos y privados que colaboraban para la gestión provincial. La segunda gran medida fue efectivizar los pagos de los salarios adeudados a los empleados públicos de salud y educación, sectores que con el tiempo se convirtieron en aliados de la gestión provincial. La tercera gran estrategia utilizada es el acercamiento del gobierno a la sociedad civil mediante su Ministerio de Desarrollo Social, quien con mucho afán registra a las organizaciones con y sin personería jurídica para luego convocarlas a formar parte de programas, proyectos y mesas comunes de trabajo.



El gobierno de nuestra provincia y su gabinete, adquieren una gran presencia en el espacio público que se mantiene en el tiempo. El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia toma una posición de intermediación entre el mercado y la sociedad civil. De ahí en adelante se ponen en marcha una serie de programas y políticas públicas fomentados por fondos públicos y privados, y ejecutados por organizaciones no gubernamentales pertenecientes a la sociedad civil.

Actualmente la labor del mencionado ministerio se ve complementada por la actividad de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, sendas instituciones públicas son las encargadas de poner en marcha los proyectos, programas y políticas sociales destinadas preferentemente a la niñez y la adolescencia, mujeres y empleo, mujeres y salud, empoderamiento femenino. Generalmente, las políticas públicas del gobierno provincial buscan garantizar a la ciudadanía el acceso a tres derechos concretos: derecho a la salud, al trabajo y la educación. Esta trilogía de derechos define el buen vivir o la vida digna de un ciudadano dentro de nuestra provincia; objetivo al que se dirigen generalmente las políticas públicas como la evaluada.

De hecho a lo largo de los años el gobierno ha desarrollado programas y políticas públicas complementarias entre sí: existiendo programas dirigidos a la familia que abordan problemáticas de violencia familiar, niñez y adolescencia; otros que están dirigidos al empoderamiento económico femenino que indirectamente benefician y mejoran la calidad de vida de la familia y sus integrantes; otros dirigidos a garantizar la vivienda digna que claramente mejoran condiciones y calidad de vida de mujeres, niñez, familia.

Políticas públicas que respondían a una línea política demarcada por el gobierno nacional desde el año 2003 en adelante, ella fomentaba el reconocimiento de los derechos humanos y la vida digna a colectivos históricamente vulnerados como las mujeres, niños, niñas y adolescentes; e identidades disidentes. Todos estos colectivos adquieren una serie de derechos positivos que si bien se encontraban reconocidos expresa o tácitamente en la constitución, no eran efectivos.

De hecho si se presta atención al periodo anterior a la puesta en marcha del programa existen una serie de antecedentes legislativos que muestran que el Estado Argentino y sus provincias comienzan a adoptar una perspectiva interseccional en sus políticas públicas. Es decir que comienzan a tener en cuenta las diferentes desigualdades sociales que sobre un mismo sujeto (individual o colectivo) operan, privándolo de su derecho al buen vivir.



Véase que si se combinan los datos obtenidos de diferentes medios de comunicación, páginas gubernamentales y marcos legislativos, se puede determinar que esta nueva perspectiva integral e interseccional que el Estado Nacional y las Provincia adoptan comienza en el año 2006 con la promulgación de la *Ley de Educación Sexual Integral* obligatoria para todos los niveles (Ley N° 21.150, 2006), que marca un antes y un después en materia de políticas públicas relacionadas con *derechos sobre la educación y salud sexual y reproductiva*.

Asimismo se dio continuidad al programa específico *Plan Jefes y Jefas de Hogar* creado por decreto 565/2002 y en cumplimiento de la Ley N° 25.561 que declaraba la emergencia pública en febrero del 2002, ordenando en su articulado una serie de acciones estatales tendientes a paliar los efectos negativos de la crisis en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (Ley N° 25.561, 2002; DNU. 565, 2002). Su finalidad última era *garantizar el derecho a la inclusión familiar*, brindando un beneficio económico a quienes tenían a su cargo hijos menores de edad. De manera concomitante se busca regularizar el trabajo, y se promueve el concepto de trabajo decente, incorporado legalmente a través del Art. 7 de la Ley N° 25.877 (2004) que establecía un nuevo Régimen Laboral.

El gobierno de la provincia, alineado con los objetivos nacionales en *materia de trabajo y seguridad social* crea el Programa Primer Paso que terminaría siendo legislado en 2014, que acompaña a los jóvenes desempleados, sin experiencia laboral relevante, mediante la realización de procesos de capacitación y entrenamiento en empresas o con empleadores privados. Así, los jóvenes reciben una retribución económica y una experiencia significativa en el ámbito laboral que les permite desempeñarse en un futuro mercado de trabajo (Ley de la Provincia de Córdoba N° 10.236, 2014).

En 2011 se sanciona y promulga la Ley 26.618 (2011) que instaura el *Matrimonio Igualitario*; y en mayo-junio del 2012 entró en vigencia la Ley de *Identidad de Género* (Ley N° 26.743, 2012). Ambas establecieron un giro en la legislación argentina incorporando conceptos y derechos vinculados a las comunidades disidentes, que serían receptados luego en la modificación y unificación de la legislación civil y comercial en 2014.

Asimismo, tanto a nivel nacional como provincial continúa la práctica de cooptación de la sociedad civil, en la cual las organizaciones del sector público no estatal se convierten en cogestoras y ejecutoras de programas y políticas públicas. La práctica consiste en convocar a organizaciones con personería jurídica a presentarse par ser ejecutoras de



un programa provincial o nacional, una vez presentada la papelería el estado asigna fondos a las organizaciones para llevar adelante una cierta actividad. En el desarrollo de esta práctica se pueden observar bondades como la construcción de redes interorganizacionales de gestión y ejecución de proyectos fomentados por el Estado o fondos mixtos (públicos y privados). Pero también algunas vicisitudes propias de las prácticas clientelares latinoamericanas en la cuales el amiguismo político y personal definen muchas veces los destinos de los fondos a cambio de lealtades políticas que se traducen en beneficios electorales para los partidos políticos implicados.

En suma los años anteriores al lanzamiento del programa, ya mostraban una actitud activa por parte del gobierno nacional y provincial por atender las cuestiones relacionadas con mujeres, y poblaciones vulnerables. Así por ejemplo, se daba comienzo a diferentes prácticas que garantizaban el cumplimiento de la Ley de Cupo Femenino (Ley N° 24.012, 1991), que culminarían en el año 2017 con la sanción y promulgación de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (Ley N° 27.412, 2017). Derecho que ya había sido garantizado a las mujeres cordobesas en el año 2000 durante la primera gobernación de De La Sota, con la sanción de la Ley provincial N° 8901 (2000).

Se continuaron los Programas y Planes nacionales destinados fortalecer a mujeres en edad fértil embarazadas o en etapa de lactancia. De hecho se incluyó dentro las prestaciones obligatorias de las obras sociales públicas y privadas, el Plan de Salud Materno Infantil. Acciones destinadas a combatir las tasas de mortalidad infantil y de la madre, generalmente provocadas por desnutrición, falta de atención sanitaria, el parto, o enfermedades prevalentes.

A nivel provincial ya existían el Programa Permanente de Atención a la Niñez y la Familia; y el Programa de Asistencia Integral de Córdoba (P.A.I.C.O.R.). El primero pondrá en funcionamiento líneas de acción en las cuales el estado colabora activamente con las tareas de cuidado y nutrición a las familias cordobesas. Llevando adelante dos líneas de trabajo a través del Programa de Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDI) cuya población objeto son infantes de 0 a 4 años. La primera consiste en la estimulación y desarrollo infantil; y la segunda en garantizar la alimentación y nutrición. Por su parte, el P.A.I.C.O.R. vigente desde la década de los noventa, trabaja de manera conjunta con las escuelas públicas proveyendo soluciones integrales y sistemáticas a las necesidades de las familias y educandos de menores recursos, sobre todo en materia alimentaria.



Durante el periodo, también se continuó con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable para la prevención del aumento de los embarazos precoces y la muerte materna por abortos provocados (2002), destinando insumos para los programas provinciales y nacionales de educación sexual y reproductiva.

Este tipo de políticas y programas fueron antecedentes directos de la posterior sanción de la ley de Educación Sexual Integral (Ley 21.150/2006), que ahonda y complementa los objetivos planteados por la Ley N° 25.673 (2002) promoviendo por ejemplo la salud sexual de los adolescentes y potenciando la participación femenina en la toma de decisiones relativas a la salud sexual y la procreación responsable.

Resulta relevante por la significación que adquiere la promulgación en el año 2004 de la Ley N° 25.929 sobre Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento, al promover el concepto de parto humanizado y combate la violencia obstétrica. Garantizando el derecho de las mujeres a ser acompañadas durante el parto por una persona de su elección, ser informada sobre los procedimientos y recibir buen trato de parte del personal sanitario.

Sin desmerecer la bondad y utilidad de la continuidad estos programas y políticas públicas a los cuales se sumaron la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, no puede dejar de remarcar que ellos continuaron fomentando un imaginario de ciudadanía femenina basada en la maternidad. Es decir, que las mujeres lograban ingresar y ejercer a la ciudadanía por su condición de madres que les permitía ser beneficiarias de estos programas de salud, educación o empleo.

De esta suerte, Argentina es condicionada exógenamente por los requerimientos internacionales que acostumbran a adoptar una perspectiva de feminización de la pobreza y la eliminación de la mortalidad infantil.

En cuanto a *trabajo y mujeres*, hacia el 2009 a nivel nacional se pone en marcha el Plan Argentina Trabaja dentro del marco de la Ley N° 26.117 (2006). Éste contemplaba beneficiarios de ambos sexos, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de las familias a través de la generación de empleo, capacitación y promoción de las organizaciones cooperativas para la realización de obras de infraestructura pública.

Para el año 2013 se da inicio dentro de esta línea al Programa Nacional Ellas hacen, dirigido específicamente a una mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad. El programa se dirigía a garantizar y promover la inclusión social de mujeres jefas de hogar monoparentales desocupadas, que perciban la Asignación Universal por Hijo,



preferentemente con tres (3) o más hijos a cargo, menores de 18 años o discapacitados, que sufran o hubieran sufrido violencia de género y vivan en barrios de vulnerabilidad.

Las beneficiarias tenían una contraprestación obligatoria consistente en: a) asistir a talleres sobre violencia de género y salud sexual y reproductiva dictados por especialistas; y b) cumplir con la finalización de los estudios primarios, secundarios, universitarios; o bien asistir cursos y capacitaciones en oficios.

Para el año 2006 se crea el Programa “Las Víctimas contra las Violencias”, atendiendo casos de abusos o maltratos cualquiera sea el origen de la violencia. Durante el mismo año, el gobierno de la provincia de Córdoba dicta la Ley de Violencia Familiar (Ley de la Provincia de Córdoba N° 9283, 2006). Plexo normativo provincial que fue completado por la Ley provincial N° 10.401 de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la Mujer por Cuestión de Género, en el Marco Procesal, Administrativo y Jurisdiccional (2016). Todo ello derivó en la creación del Polo de la Mujer, sector público destinado específicamente a trabajar con mujeres atravesadas interseccionalmente por diferentes vulnerabilidades como violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia simbólica, trata, etc.

Durante el 2009 se desarrolla el debate de la ley nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (Ley N° 26.485, 2009).

En ese entonces (2006-2007) la sociedad civil se veía conmocionada por el caso Marita Verón, que había tomado gran repercusión pública, mediática, y política. Su madre Susana Trimarco en 2007 daba vida a la Fundación Marita Verón con sedes en todo el país, dirigida a atender y prevenir casos de trata de persona y prostitución forzada. Finalmente en el año 2008 se sanciona y promulga la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Ley N° 26.364, 2008), y en 2009 la labor social de Susana Trimarco fue distinguida por la Presidencia de la Nación.

El compromiso gubernamental de combatir los casos de trata de personas con fines de explotación sexual, es una acción reproducida por los gobiernos locales que se incrementa a partir del 2012 cuando el caso Marita Verón entra en su etapa final y termina absolviendo a los acusados. Posteriormente en 2013, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, revoca el fallo y condena a los acusados.

Córdoba, sanciona la Ley Provincial N° 10.060 (2012) de Lucha Contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual.



Realizándose campañas de concientización de sobre la trata, se cerraron las whiskerías dentro del ámbito de la provincia, y se criminalizó a la prostitución callejera.

Así fue como tomo visibilidad pública la asociación civil AMMAR, entre sus objetivos busca la regulación del trabajo sexual, éste colectivo junto a otras organizaciones como la ONG14 ponen en marcha una serie de reclamos a la provincia, ya que las mujeres que ejercían la prostitución de manera voluntaria, no podían trabajar. Estas mujeres habían sido erradicadas de las calles e insertadas en programas de rehabilitación que no proveían de fondos para su subsistencia ni la de sus familias. El conflicto finalmente fue desarticulado mediante el otorgamiento de subsidios y ayudas económicas estatales a estas personas.

Como surge de los datos, se generan una serie de políticas públicas nacionales y provinciales contra la trata de personas que se entrecruzan incluso hacia el interior de los colectivos entre las demandas de las feministas abolicionistas y quienes buscan la legalización del trabajo sexual.

Entre los años 2010 el Ministerio de Salud de Nación, hace pública la guía de aborto no punible como una revisión del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Incluyendo en ella, los casos de violación sin que sea necesario judicializarlos para habilitar la práctica abortiva (Ministerio de Salud de la Nación, 2010). En consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido como Fallo F.A.L. (2012), declara constitucional su aplicación.

Acción también imitada por el gobierno de la provincia de Córdoba. De hecho, el Ministerio de Salud provincial mediante la Resolución 93/12 (2012) implementa la “Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles”.

Esta última, tuvo una corta aplicación dentro del ámbito provincial ya que el abogado, legislador Pro- Vida y representante de la Asociación Civil Portal de Belén García Elorrio, interpone una demanda de inconstitucionalidad en virtud de que esta guía según su percepción personal pone en riesgo el derecho a la vida del por nacer, demorando la efectiva aplicación del protocolo pos seis años.

La acción de amparo obtiene una resolución favorable en primera instancia, que es apelada; luego de un tiempo el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba consideró que no había una real contienda judicial que le permitiera revisar la



constitucionalidad de la Resolución 93/12, ya que esta da cumplimiento al art. 86 inc1 y 2 del Código Penal.

La elevación a juicio y resolución del Caso Marita Verón en 2012, ya pasada la visibilidad pública de las demandas del colectivo LGTBIII+ y la efectiva sanción y promulgación de las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género, concurre con luminosidad los casos de violencia contra las mujeres (2011-2013) que ya venía en ascenso desde el 2008.

En ese contexto se sanciona la Ley N° 26.791 (2012) que sustituye los incisos 1 y 4 e incorpora los incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal. , e incorpora incorporando la figura penal del femicidio. Agregando a la figura penal de homicidio agravado, la especificidad del femicidio.

Para ese momento, ocurren movilizaciones encabezadas por el colectivo #NIUNAMENOS, originado por un grupo de periodistas bonaerenses que se vieron exigidas a “hacer algo” frente a la cantidad de muertes violentas de mujeres por parte de sus parejas o familiares.

Este grupo tuvo repercusiones en Córdoba, donde el detonante para sumarse a la movilización nacional vino dado por el emblemático caso de Paola Acosta (2014). En aquella histórica marcha del 3 de junio de 2015 en las calles de diferentes ciudades argentinas se entrelazaban y entrecruzaban “*los feminismos*” confluyendo hacia un mismo reclamo de responsabilidad Estatal por los feminicidios ocurridos hasta el momento.

Notoriamente esta marcha se convierte en un marco de posibilidad dentro del cual la lucha por el aborto legal toma rudeza y publicidad al entremezclarse con los demás feminismos. En la actualidad *la marea verde*, encabeza estas marchas donde las demandas no solo contienen reclamos por acciones concretas respecto de la violencia contra las mujeres, sino también un claro y contundente pedido de legalización del aborto que ha logrado media sanción legislativa en 2018.

El Programa Provincial Red de Salas Cuna

Dicho programa comienza en el año 2016, proponiéndose dos objetivos complementarios: por un lado, contribuir al desarrollo psico-social de los niños y niñas; y por otro, asistir a la mujer dando la tranquilidad del cuidado y contención de sus hijos mientras trabaja o asiste a la escuela, contribuyendo así a la inserción social y laboral de las mujeres. El programa garantizado legislativamente en el año 2018 (Ley



N°10.533), establece que tales centros de atención gratuita son gestionados por personas jurídicas públicas y/o privadas sin fines de lucro de la sociedad civil.

El programa conjuntamente con otros demuestra un claro compromiso estatal con la difusión, promoción y garantía efectiva de los derechos de la niñez y, tangencialmente, de las mujeres. Así Estado, Familia, Mujeres y Mercado, comparten o se reparten el riesgo según el tipo y nivel de solidaridades de clase existentes en cada sociedad (Esping-Andersen, xxxx). Para el caso concreto la solidaridad de clase gira en torno a la infantilización de la pobreza como proceso en el cual intervienen diferentes actores sociales. De manera concomitante opera una feminización de la pobreza provocada por las condiciones de vulnerabilidad económica, simbólica y cultural en las que se encuentran ciertos sectores de la sociedad como las mujeres en general y mujeres madres empobrecidas.

Desde este punto de vista tanto la directa infantilización de la pobreza como su tangencial feminización, no son más que el reconocimiento y visibilización del desamparo y las distancias extremas que se construyen a partir de las condiciones en las que viven las familias de estos niños y del tipo de pobreza de la sociedad.

A nuestro entender el Programa Red Provincial de Salas Cuna, se encuentra alineado con el contenido de nuestra carta magna. Más específicamente, lo consideramos como una política pública activa que hace operativos los derechos sociales contenidos en el Art. 14°; Art. 43, Art. 75°, inc. 22 y 23.

Estos encargan a los órganos legislativos la creación y promoción de medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades, de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, los que se refieren a la niñez y mujeres. En consonancia la Ley Provincial N° 9944 (2011), también establece el acceso a la vida digna.

Con mayor precisión el programa evaluado pone en marcha una acción estatal que cumple con lo ordenado por el texto de la Ley N° 26.061 sancionada en 2005, la cual instrumenta a nivel nacional la CDN que explicita en su artículo 18 inciso 2:

“...A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la



crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños...”

En relación a mujeres, dicho programa pone colabora en la obtención de un correcto pie de igualdad en el cual quienes poseen la condición de madres son acompañadas por el Estado en las tareas de cuidado. Dando cumplimiento al articulado de la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Ley N° 23.179, 1985), incorporada con jerarquía constitucional en 1994; y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer - "Convención de Belem do Pará" (Ley N° 24.632, 1996), cuyo articulado aquí no reproduciremos.

Vale tener presente que hoy por hoy los Derechos Constitucionales y, dentro de ellos los Derechos Sociales, dejaron de ser simples proclamaciones y no son solamente reconocidos por la legislación y la jurisprudencia nacional, sino también por las normas internacionales. Se trata, por tanto, de Derechos Sociales con eficacia jurídica y vinculantes por sí solos, estén o no reglamentados por la legislación secundaria.

De esta manera, los marcos legales proporcionan las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación ciudadana y política. En consecuencia durante estos últimos años muchas mujeres pueden terminar sus estudios o bien trabajar en relación de dependencia o de manera independiente al menos 4 horas. En algunos casos se ha logrado la inclusión de las mujeres en el sector formal de trabajo, en otras no.

Consideraciones finales

Esta investigación adopta al evaluar el programa mencionado adopta una perspectiva interseccional, ejercitando de manera constante un enfoque de género. Aplicando una herramienta analítica que permita comprender las maneras en las que el género se cruza con otras identidades que viven los mismos sujetos; y que han sido forjadas por ellos, debido a la asunción de otros factores condicionantes como la pobreza, lugar de origen, profesión, etc.

La interseccionalidad es una caja de herramientas creativa que propone aplicar las teorías arraigándolas en cada espacio y tiempo, de manera tal que no se vean silenciadas las voces locales, ni mucho menos dejar de visibilizar todas las condiciones que atraviesan y condicionan a las personas o grupos sociales. Como teoría feminista,



no deja de convertirse en una perspectiva que invita a hablar de identidades o de desigualdades múltiples e interdependientes (Viveros Vigoya, 2016)

El paradigma interseccional nos propone abordar la realidad que observamos e intentamos comprender, teniendo en cuenta las diferentes implicancias – variables- que sobre el sujeto individual operan. Así las personas o grupos de personas como punto de encuentro se ven travesadas por diferentes condiciones como el sexo, la raza, la etnia, la religión, el nivel de ingresos, etc.

Así, las desigualdades que la yuxtaposición de diferentes condiciones que sobre el sujeto operan deben ser paliadas por la puesta en marcha de políticas y programas públicos que pongan de manifiesto acciones efectivas sobre desigualdades y discriminaciones basadas en género, raza, etnia, posición económica, origen nacional o social, opinión política, etc.

El Programa Salas Cuna que hoy se ha establecido como una política pública dirigida a mejorar las condiciones de vida de la población cordobesa, puede ser incluida dentro de esta batería o caja de herramientas con perspectiva interseccional.

En este sentido el programa viene a compartir y aliviar la tarea de cuidado de nuestras mujeres cordobesas mientras ellas trabajan o estudian; facilitando que aquellas mujeres que no están o estaban haciéndolo, tengan la oportunidad de comenzar o continuar con su trabajo o estudios. De esta forma el trabajo de cuidado que naturalmente debe realizar una mujer – madre y que muchas veces es el principal motivo o una de las tantas yuxtaposiciones que atraviesan a las ciudadanía femeninas ahora es compartido con el Estado quien pone a disposición e instaura un espacio público de cuidado. Positivamente el programa instituye un espacio público de cuidado fomentando lazos comunitarios entre ciudadanas que encuentran apoyo en las diferentes instituciones. Por otra parte libera a las mujeres por algunas horas de la cotidianeidad del trabajo de cuidado, fomentando que la persona encuentre un espacio para sí mismo y de esta manera pueda trabajar o estudiar, como formas de inserción ciudadana y modificación de las condiciones de vida de cada individuo. También pone en valor y visibiliza el trabajo de cuidado que las mujeres llevan adelante al instituir un espacio público de cuidado en el que son las mismas redes de mujeres barriales las que trabajan conjuntamente con profesionales y agentes estatales. Ello hace del programa una política pública en la cual se toma en valor la participación de la comunidad como requisito indispensable para su efectividad (Sorj, 2016).



Puede interpretarse que la institucionalización de un espacio público de cuidado que propone la participación comunitaria en la cogestión estatal- particulares del trabajo de cuidado donde mayoritariamente participan mujeres, no hace más que reafirmar las dicotomías propias de un sistema jerárquico de sexo – género. Pero la realidad es que muchas de las organizaciones no gubernamentales con las que el estado cogestiona este tipo de políticas públicas son lideradas por mujeres, como si estas se hubiesen convertido en las madres públicas que junto a un Estado paternalista llevan adelante políticas públicas dirigidas a los más vulnerables. Estas organizaciones se convierten en espacio de re significación de la femineidad y todos los roles que ella asigna, convirtiéndose en espacios de ciudadanía activa y de impresión de proyecto personal tanto para quienes participan de la ONG como de quienes se benefician con sus acciones e intervenciones. Lo que no quita que también, pudiera operar como un encorsetamiento de las ciudadanías femeninas en espacios públicos no estatales y no políticos afirmando una vez más que el trabajo de cuidado público y privado corresponde a las mujeres. Y no a todas las mujeres, sino a aquellas que interseccionalmente son ubicadas en una determinada posición social por el bajo o nulo nivel de ingresos, origen nacional, nivel educativo, territorios de pertenencia, etc. (Jodor, 2012, 2016, 2018).

Por otra parte, la organización de las prácticas de cuidado en nuestra sociedad depende de la dinámica que asuma la relación entre Estado, mercado y las familias. De acuerdo a cómo se configure esta relación nos encontraremos con una trama de cuidados específica.

La puesta en marcha del Programa Salas Cuna incide directamente en la dinámica del entramado social, particularmente en los barrios populares, donde las comunidades se organizaban construyendo diversas estrategias de cuidado. Muchas de ellas apoyándose en redes familiares y comunitarias: abuelos, hermanos, tíos, etc. y formas organizativas de la comunidad que se construyen a partir de la identificación de una necesidad colectiva. En este sentido las estrategias quedaban recluidas al ámbito familiar y territorial. En tanto el mercado, que a lo largo del tiempo ha presentado ofertas de jardines privados, se constituía en una posibilidad de acceso para familias con nivel de ingresos económicos que permitieran afrontar el pago de una cuota mensual. De esta posibilidad quedaban excluidas las familias de bajos recursos económicos.

En este sentido, los sectores populares, particularmente las mujeres, se veían obligadas a afrontar la organización de los cuidados, lo que implicaba la exclusión de otros ámbitos de la vida social. Las estrategias familiares se dirigían a afrontar prácticas reproductivas



dentro del ámbito doméstico, sin posibilidad de participar de otros ámbitos como el laboral y el educativo. La puesta en marcha de este programa, tiende a modificar las dinámicas familiares y la organización de las prácticas de cuidado, permitiendo realizar otro tipo de actividades que no necesariamente están vinculadas a prácticas productivas de reproducción y consumo en el ámbito intradoméstico.

El mercado es desplazado de su posición dominante en la oferta de servicios de cuidado, tomando el Estado un papel central en la organización de estructuras organizativas que permitan la producción de este tipo de servicios. De esta manera es posible pensar que la ejecución del programa tiende a generar grados de desfamiliarización, disminuyendo y repartiendo la carga de cuidado que asumen las familias. Pero a su vez tiende a desmercantilizar el acceso a estos servicios al brindar atención de manera gratuita.

Notas

¹(nerealucreciajodor@hotmail.com)

²(juan.lenardon90@gmail.com)

³(karim_steg@hotmail.com)

Bibliografía

Cohen, J. y Arato A. (2000). *Sociedad civil y teoría política*. D.F., México: Fondo de cultura económica.

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 565. Programa Jefes de Hogar. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 3 de abril de 2002.

Domingues, J.M. (2009). *La modernidad contemporánea en América Latina*, Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.

Esping Andersen, G. (1993). *Los tres mundos del Estado del Bienestar*. Edicions Alfons el Magnánim-IVEI, Valencia.

Esping Andersen, G. (2000): *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*. Ariel, Barcelona.

Jodor, N. (2012). *Una posible óptica de las Mujeres en la cristalización de Movimientos Sociales*. VII Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2012, La Plata, Argentina. Argentina en el escenario latinoamericano actual: Debates desde las ciencias sociales. EN: Actas. La Plata: UNLP-FAHCE. Disponible en:<<https://bit.ly/35tM0Y7>>

Jodor, N. (2016). *Trascendencia Feminista. El más allá del movimiento feminista o de mujeres*. VI Coloquio Interdisciplinario Internacional "Educación, Sexualidades y



Género". IV Congreso Genero y Sociedad, 21 a 23 de septiembre de 2016, Córdoba, Argentina. En actas:

<<http://conferencias.unc.edu.ar/index.php/gyc/4gys/paper/view/4402>>

Jodor, N. (2019). Discusiones y consideraciones teóricas en torno a la desigualdad y exclusión en relación a las mujeres, movimientos sociales y ONG's. *Anuario del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, (XVII)*, 603-622.

Ley de la Provincia de Córdoba N° 10.060. Lucha Contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina, 8 de julio de 2012.

Ley de la Provincia de Córdoba N° 10.236. Programas de empleo. Programa Primer Paso. Implementación anual obligatoria. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina, 26 de noviembre de 2014.

Ley de la Provincia de Córdoba N° 10.401. Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la Mujer por cuestión de Género, en el Marco Procesal, Administrativo y Jurisdiccional. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina, 25 de noviembre de 2016.

Ley de la Provincia de Córdoba N° 8901. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina, 19 de diciembre de 2000.

Ley de la Provincia de Córdoba N° 9283. Ley de Violencia Familiar. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina, 13 de marzo de 2006.

Ley N° 21.150. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 23 de octubre de 2006.

Ley N° 21.150. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 23 de octubre de 2006.

Ley N° 23.179. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 27 de mayo de 1985.

Ley N° 24.012. Código Electoral Nacional. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 29 de noviembre de 1991.

Ley N° 24.632. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer - "Convención de Belem do Pará". Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1996.

Ley N° 25.561. Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 6 de enero de 2002.



Ley N° 25.673. Salud Pública. Créase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud. Objetivos. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 21 de noviembre de 2002.

Ley N° 25.877. Régimen Laboral. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 18 de marzo de 2004.

Ley N° 25.929. Salud Pública. Establécese que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al Programa Médico Obligatorio. Derechos de los padres y de la persona recién nacida. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 17 de septiembre de 2004

Ley N° 26.117. Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 17 de julio de 2006.

Ley N° 26.364. Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia A Sus Víctimas. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 29 de abril de 2008.

Ley N° 26.485. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1 de abril de 2009.

Ley N° 26.618. Matrimonio Civil. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 21 de julio de 2011.

Ley N° 26.743. Identidad de Género. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 23 de mayo de 2012.

Ley N° 26.791. Código Penal. Modificaciones. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 11 de diciembre de 2012.

Ley N° 27.412. Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 22 de noviembre de 2017.

Ley N°10.533. Programa Provincial Red de Salas Cuna. Legislatura de la Provincia de Córdoba, Argentina, Abril 2018.

Ministerio de Salud de la Nación (2010). Guía Técnica para la atención Integral de los Abortos No Punibles. Recuperado de: <<https://bit.ly/2XfinFo>>

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba (2012). Resolución 93. Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no



Punibles. Recuperado de: <https://prensa.cba.gov.ar/salud/aborto-no-punible-guia-de-procedimiento/>

Sorj, B. (2016). Políticas sociais, participação comunitária e a desprofissionalização do care Cuadernos Pagu (46), pp. 107-128. Recuperado de: <<https://bit.ly/38gKQAV>>

Tarrow, S. (2008). *Beyond Globalization: Why Creating Transnational Social Movements is so Hard and When is it Most Likely to Happen*. Países Bajos: Diálogo solidaridad global. Recuperado de: <http://globalsolidarity.antenna.nl>

Viveros Vigoya, Mara (2016) La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación Disponible en www.sciencedirect.com Debate Feminista 52 (2016) 1–17. Recuperado de: www.debatefeminista.pueg.unam.mx Intersectionality.



Mulheres e economia solidária no Brasil - Processos organizativos e lutas por trabalho, cidadania e políticas públicas.

Carlúcia Maria Silva¹
Helania Martins de Souza²

Resumo

As transformações ocorridas no mundo do trabalho têm atingido não somente os trabalhadores formais, mas também trabalhadores informais que vivenciam no cotidiano, processos de exclusão histórica, como é o caso de grupos produtivos de economia solidária. O presente trabalho analisa processos organizativos de mulheres em suas lutas, construídas em conjunto com a sociedade civil, em busca de direitos, dignidade e cidadania. As reflexões aqui apresentadas resultam do acompanhamento de empreendimentos de economia solidária, por meio de visitas nos empreendimentos, participação em suas atividades de trabalho, entrevistas semiestruturadas e observação direta em suas mobilizações coletivas em busca de trabalho e renda. Os resultados ainda parciais apontam o protagonismo das mulheres em suas lutas por direitos, a (re)construção de vínculos sociais e a melhoria da autoestima. Foi possível visualizar também dificuldades e desafios enfrentados em suas lutas, por trabalho, cidadania e acesso a direitos. O trabalho de pesquisa-ação, ainda em curso, tem impactado positivamente os envolvidos neste Projeto e possibilitado a relação dialógica entre a Universidade, Comunidade e Sociedade Civil, possibilitando assim, numa perspectiva interdisciplinar, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Palavras chave

Mulheres; Economia solidária; Trabalho em redes; Participação cidadã; Políticas Públicas.

Introdução

Ao longo das últimas décadas do século XX e início do século XXI, profundas transformações vem ocorrendo no mundo do trabalho e impactando parcelas crescentes da classe trabalhadora, possibilitando assim, a emergência do trabalho cooperado, nos quais trabalhadores e trabalhadoras desempregados recorrem a atividades informais como alternativas de trabalho, inclusão socioproductiva e renda. Um cenário no qual cada vez mais se agravam situações de pobreza, desemprego e exclusão.



No Brasil, os fenômenos conjunturais se intensificaram com a abertura indiscriminada do mercado brasileiro às importações nos anos 1990 e adoção de uma política nacional de altas taxas de juros. O desemprego, a informalidade e a contratação de trabalhadores intermitentes³ precarizou mais ainda as relações de trabalho e o acesso a direitos. Um cenário no qual pobreza e desigualdades se aprofundam, crescem as dificuldades de sobrevivência em um mercado globalizado, competitivo e excludente e como resposta ao desemprego que se agrava mais ainda proliferaram-se iniciativas populares, de organização do trabalho com base na autogestão, na cooperação, no desenvolvimento sustentável e na solidariedade. Empreendimentos econômicos, situados no contexto da informalidade urbana capitalista, apoiados por entidades de apoio e fomento, gestores públicos, Universidades e Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs).

Essas iniciativas populares são organizadas sob os princípios da solidariedade e da autogestão e têm encontrado um vasto campo de ação. Empreendimentos econômicos solidários nos quais desigualdades de gênero e de raça/cor se fazem cada vez mais presentes. Nelas, trabalhadores e trabalhadoras buscam novas alternativas de trabalho, renda e inclusão socioproductiva, pautados nos princípios e valores da economia popular solidária, dentre os quais podemos destacar: a posse coletiva dos meios de produção e distribuição, gestão democrática, cooperação e autogestão, valorização do trabalho e dos trabalhadores. No Brasil, as experiências de economia popular solidária são marcadas por uma diversidade de práticas econômicas e sociais, que oportunizam a democratização das relações sociais e consideram o ser humano em sua integralidade, enquanto sujeito da atividade econômica. Tais iniciativas são organizadas sob a forma de grupos produtivos, cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, produção de bens, prestação de serviços, finanças e/ou solidárias, comércio justo e consumo solidário. O trabalho é movido por uma forte consciência socioambiental em busca de um modelo de desenvolvimento sustentável e do bem-viver. Dito de modo diferente, a Economia Solidária é um modo de produção de bens ou prestação de serviços, comercialização e consumo, cujo trabalho é pautado nos princípios da cooperação e sustentabilidade.

O presente trabalho analisa processos organizativos de mulheres em suas lutas, por trabalho, direitos, dignidade e cidadania. As reflexões aqui apresentadas resultam do acompanhamento de empreendimentos de economia solidária, por meio de visitas nos empreendimentos, participação em suas atividades de trabalho, entrevistas



semiestruturadas e observação direta em mobilizações coletivas. Os resultados ainda parciais apontam o protagonismo das mulheres em suas lutas por direitos, a (re)construção de vínculos sociais rompidos e a melhoria da autoestima. Foi possível visualizar também dificuldades e desafios enfrentados em suas lutas e articulações construídas. O trabalho de pesquisa-ação, ainda em curso, tem impactado positivamente os envolvidos neste Projeto e possibilitado a relação dialógica entre a Universidade, Comunidade e Sociedade Civil, possibilitando assim, numa perspectiva interdisciplinar, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A histórica exclusão social no Brasil e seus entraves na construção da cidadania

Situações de pobreza e desigualdades, sobretudo nos chamados países emergentes têm possibilitado proporções dramáticas de privações e reforçado situações de exclusão, o que de certa forma estimula a não participação de grande parte da população empobrecida em atividades coletivas e ações conjuntas. É a partir dessa reflexão que se torna importante compreender a construção da cidadania no Brasil, historicamente institucionalizada e construída em torno da dependência do Estado e seus interesses, carregando consigo paradoxos que desafiam a solidariedade social e a confiança mútua.

No que se refere à construção da cidadania no Brasil, estudos desenvolvidos por José Murilo de Carvalho apresentam uma cidadania diferenciada e hierarquizada. Um contingente de homens e mulheres sem carteira assinada, sem acesso à educação de qualidade, sem trabalho decente e sem moradia digna, tratados sob o regime da generosidade na roupa e comida, e contenção no porrete evidencia as raízes “dos sem”. A participação na política nacional é quase nula; e até que prove o contrário, é culpado. E às vezes “até depois da prova em contrário”. (Carvalho, 1998, p. 309).

O período colonial deixou marcas relevantes e duradouras e o fator mais negativo para a cidadania no Brasil foi a escravidão. Presentes em todas as atividades, tanto no meio rural quanto nas áreas urbanas, os escravos eram responsáveis por toda sorte de serviços nos campos e nas cidades. Faltavam-lhes quase todas as condições para o exercício de direitos. Considerados como coisas e equiparados a animais, os escravizados eram posse e propriedade de seus senhores. Ser dono de escravos representava status sociopolítico e econômico, fato que alguns dos escravos, uma vez alforriados, também adquiriam escravos, e assim, a escravidão se fazia presente “em todas as classes, em todos os lugares, em todos os desvãos da sociedade.



Argumenta Carvalho (2003, p. 19-20) que “a sociedade colonial era escravista de alto a baixo”. Os quilombos representaram uma das formas de resistência e combate à escravidão. No entanto, não obstante a experiência vivenciada nos quilombos, a escravidão afetou tanto os escravos como também os senhores, pois no que diz respeito à formação do cidadão, o escravo não desenvolveu a consciência de direitos e o senhor, além de não admitir direitos ao escravo, reforçava para si e para os seus, a exigência de privilégios por considerar-se acima da lei.

O escravismo foi para os negros nas Américas uma experiência socio- histórica crucial. No caso brasileiro, pouquíssimos foram os casos de mobilidade ascendente e mesmo assim, estes foram aceitos como inferiores tanto social, como cultural e economicamente. “A restrição a um status subordinado de brasileiros não brancos e sua concentração em áreas mais atrasadas e segregadas, resulta do período colonial e escravocrata, que no Brasil teve duração de mais de três séculos” (Hasenbalg, 2005a, p. 233). Vale destacar também que às mulheres e aos escravos era negado o acesso à justiça, pois eram considerados propriedades dos senhores, estavam sob seu arbítrio e sua jurisdição e, portanto, lhes deviam fidelidade e obediência acima de tudo. A experiência da escravidão e do latifúndio não proporcionou condições favoráveis à formação de futuros cidadãos. E somando-se à escravidão, a forte presença do patriarcalismo negava a cidadania às mulheres, aliando-se ao latifúndio, que sob a proteção da Igreja e do Estado fazia o mesmo com seus dependentes.

Com a abolição da escravatura, em 1888, os escravos foram incorporados somente aos direitos civis: uma incorporação mais formal que real, pois aos escravos libertos não lhes foram oportunizados acesso à escola, direito a terra e ao emprego. Muitos retornavam às fazendas de origem ou às fazendas vizinhas em busca de trabalho, ainda que em troca da comida e garantia da sobrevivência; outros, migraram para as cidades engrossando a parcela dos sem-trabalho, sobrevivendo nas ruas, favelas e cortiços. São questões assim, dentre outras, que contribuem para que no Brasil, o tema da cidadania para grande parte da população brasileira seja cada vez mais confuso e complexo.

Cidadania: Uma nova gramática sociopolítica, pautada no fortalecimento da democracia participativa, em busca de reconhecimento

As últimas décadas do século XX marcaram mudanças paradigmáticas, nas quais, foi perceptível uma revolução silenciosa de grandes proporções nos movimentos sociais modernos. Novos paradigmas, mudanças geracionais e societárias ocorridas, sobretudo



após a II Guerra mundial, que além das inovações tecnológicas e o avanço educacional, possibilitou também, “o surgimento de grupos e movimentos sociais com maior potencial emancipatório” (SOUZA, 2000, p. 159). Ou seja, processos de fundamental importância, em que as ações de movimentos sociais denunciavam além da crise do *welfare state*, a fragilidade do poder estatal, as consequências da globalização econômica, a crise da sociedade do trabalho, a queda dos regimes totalitários e a ascensão de movimentos identitários.

Por meio desta crise estrutural, as bases e fundamentos da sociedade salarial são abalados e conforme afirma Antunes (2006a e 2006b), remete a um novo “movimento teórico”, cuja característica mais marcante é a constatação de que a categoria trabalho não é mais suficiente para dar conta dessa nova realidade, nem tampouco consegue contemplar a variedade de interesses que impulsionam as organizações e movimentos sociais. Um cenário que, vem exigindo pensar categorias teóricas mais abrangentes e capazes de ter em conta as demandas dos diferentes movimentos sociais, a partir de suas especificidades, mantendo, porém, seu caráter universalista e para além da categoria trabalho. A globalização e o neoliberalismo não somente intensificaram a desigualdade econômica, como também “redefiniram de modo significativo o terreno político-cultural, no qual os movimentos sociais empreendem suas lutas” (Dagnino, 2000, p, 45-46).

É a partir desse cenário, que no Brasil e na América Latina, o discurso da teoria social crítica ganha força nos debates acadêmicos e políticos e o desafio na elaboração de uma nova gramática referenciada na teoria gramsciana se firma enquanto referência coletiva. Novos temas, procedimentos, linguagens e regras simultaneamente se tornam ingredientes básicos na construção de uma nova cultura política e projeto democrático. Uma nova cultura política que envolve uma multiplicidade de sujeitos.

Os movimentos sociais latinoamericanos são extremamente heterogêneos e expressam pluralidades de interesses. A multiplicidade de sujeitos políticos e dispersão de objetivos presentes na heterogeneidade dos movimentos sociais, na visão desses autores, muitas vezes acabam por inviabilizar a hegemonia e amplia os dilemas na sua construção. No entanto, embora contraditórias, permanentemente é perceptível nessas organizações sociais e populares, a busca de novos paradigmas e significados em relação a seus objetivos e metas.

Vários autores⁴ têm reafirmado que a percepção da necessidade de mudanças sociopolíticas e culturais foi fundamental no processo da democratização brasileira.



Nesse sentido, grande parte da agenda e das ações políticas se dirigia ao confronto da cultura autoritária, tendo em vista a reconfiguração da sociedade como um todo, sua redefinição política e implicações decorrentes. A exigência de mudanças sociopolíticas e culturais tinha como pressuposto a convicção de que não bastava apenas reivindicar direitos sociais e sim, uma luta mais ampla pelo “direito a ter direitos e a clara percepção de que a privação material e econômica, agregada à exclusão política, se desdobra em implicações culturais e negação do reconhecimento enquanto sujeitos de direitos” (Dagnino, 2000, p. 82).

As lutas políticas desencadeadas pelos movimentos sociais nos anos 80 tinham em comum as ideias de democracia e de participação e numa diversidade de organizações não governamentais e universidades, que se somavam à Igreja Católica, partidos políticos de esquerda, compartilhavam ações mobilizadoras e discursos contestatórios. Novos sujeitos sociais até então “invisíveis e silenciados”, socialmente excluídos e marginalizados se conectavam em suas lutas populares. Com a transição democrática, o conceito de cidadania ganha novo caráter e passa a ser compreendida como sinônimo de “*empowerment*”, ou seja, o fortalecimento da sociedade civil, que a partir de experiências participativas, determinados setores da sociedade reivindicavam por políticas públicas, acesso a serviços públicos de qualidade e outros bens simbólicos.

Nessa perspectiva, autores como Alvarez, Dagnino e Escobar (2000), chamaram a atenção para a organização em redes, ou se preferirmos, teias de movimentos sociais, em que organizações não governamentais e instituições da sociedade civil possibilitaram a criação de uma pluralidade de espaços públicos, muitas vezes informais e descontínuos. E neste contexto os fóruns se destacam enquanto novas arenas de lutas sociais e políticas, nas quais os conflitos se constituíram interlocutores de novos direitos coletivos e novas esferas públicas de formação, de participação, mobilização e organização. Novos direitos e reconhecimento, por meio dos quais novos sujeitos sociais historicamente excluídos, reinventam por suas lutas e práticas concretas, a “cultura de direitos”. E assim, articulados em suas ações em redes se constroem “sujeitos políticos coletivos e heterogêneos [e] compartilham princípios e valores relacionados à cidadania e democracia participativa” (Dagnino, 2004, p. 104-109). Lutas por reconhecimento que reafirmam novas sociabilidades nas quais as relações sociais se fundam em princípios de igualdade e de solidariedade.



Trabalho autogestionário e economia solidária

São vários os estudos⁵ afirmando que as experiências de economia solidária decorrem da crise do trabalho, conseqüente da reestruturação produtiva e capitalista que reduziu postos de trabalho e salários, potencializou a subcontratação, terceirização e flexibilização, substituindo assim relações formalizadas de emprego por novas e diversas modalidades de contrato de trabalho. Segundo Silva (2009) a economia popular solidária recobre uma realidade complexa e diversificada. Um conjunto de atividades socioeconômicas e sociocomunitárias, pautadas na autogestão, na cooperação, na reciprocidade e no desenvolvimento sustentável; fundamentadas na solidariedade e caracterizadas como experiências de trabalho cooperado.

Esta "outra economia" é resultante de fenômenos conjunturais, decorrentes da abertura indiscriminada do mercado brasileiro às importações e da adoção de uma política nacional de altas taxas de juros intensificados no início dos anos 1990. O desemprego está na raiz dos problemas sociais enfrentados e agrava as condições da pobreza. Nessas iniciativas se fazem presentes mulheres, migrantes, negros, pessoas com deficiência física ou mental, idosos, adolescentes, pessoas com baixos níveis de escolaridade e qualificação profissional que encontram na informalidade formas de trabalho e inclusão socioproductiva

As iniciativas de economia popular solidária desponta enquanto experiências de trabalho e geração de renda em um contexto socioeconômico complexo e um mercado de trabalho desestruturado. No caso brasileiro, embora essas iniciativas se façam presentes de forma mais intensa na década de 1990, sua institucionalização ocorre somente em 2003, com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) ganhando assim status, de política pública e sendo patrocinadas não somente pelo poder público⁶ (MTE/SENAES), mas também por organizações não governamentais, instituições religiosas e organizações sindicais.

As práticas organizativas autogestionárias ganham força na segunda metade do século XX, em conseqüência da reestruturação produtiva.

Argumenta Silva (2009) e Silva (20014) que essas iniciativas ganham expressão nas periferias das cidades e zona rural do país, a partir da ação direta de igrejas, sindicatos e organizações não governamentais. O trabalho associado aparece como resposta à nova sociabilidade imposta pelo capital, envolvendo segmentos de trabalhadores desde os mais vulnerabilizados com a baixa escolarização e qualificação e que nunca interagem no mercado de trabalho formal, até trabalhadores desempregados que se



submetem ao trabalho precarizados pela via do autoemprego. A Autora aponta para o descomprometimento do Estado, no que se refere à universalização dos direitos, a começar pelo direito ao trabalho assalariado e suas garantias sociais.

Neves (2012) e Araújo (2012), dentre outros autores⁷, argumentam que os anos 2000, no Brasil, sinalizam novo marco na economia nacional, possibilitando assim moderados processos de crescimento, aumento contínuo de empregos formais e redução do desemprego. No entanto, as novas ofertas de trabalho formal são direcionadas a um público que não é especificamente o público presente nos empreendimentos econômicos solidários, que em sua maioria, não dispõe da qualificação exigida para ocupar as vagas oferecidas no mercado formal. Ainda sobre esta questão, Araújo (2012) sustenta que o crescimento da economia, a redução do desemprego e da informalidade, “não foram suficientes para atenuar as desigualdades de gênero, nem reduzir a inserção de grande parcela das trabalhadoras em posições precárias” (Araújo, 2012, p. 136).

Processos organizativos e lutas por trabalho, cidadania e políticas públicas - Os fóruns de economia popular solidária

Experiências exitosas em vários campos, sobretudo na área de saúde, se expandem no Brasil nos anos 1990, desencadeando processos organizativos denominados fóruns, objetivando fortalecer a formação e articulação de organizações populares e sociais. Os fóruns são instâncias organizativas e espaços de formação e articulação de organizações da sociedade civil em suas lutas por direitos e o protagonismo dos sujeitos. Organizados em nível nacional, estadual, regional e local, tornam-se espaços permanentes de representação, diálogo, articulação, proposição, troca de saberes, fomento e desenvolvimento local. Um movimento não institucional, que reúne representantes de organizações da sociedade civil, de entidades de apoio e fomento, gestores públicos e universidades. Neles também se fazem presentes pessoas comprometidas com o fortalecimento da democracia participativa e cidadã. Uma das principais metas dos fóruns é promover a mobilização e inserir na agenda pública propostas e demandas relacionadas a temas variados, tais como, políticas públicas, questões ambientais, saúde, direitos humanos, direitos de grupos étnicos, de pessoas com mobilidade reduzida, orientação sexual, dentre outros. Fortalecer a democracia plena são metas e desafios permanentemente perseguidos.

Estudos apontam que a democracia representativa foi se constituindo ao longo da história, não apenas nos processos eleitorais formalizados, mas também por meio de outras formas de participação. No entanto, no Brasil a experiência de organização em



fóruns, enquanto instrumento de novas formas participativas, tem seu marco inicial nas últimas décadas.

No que diz respeito à economia popular solidária, os fóruns de economia popular solidária são instâncias organizativas do Movimento de Economia Solidária, organizados em nível nacional, estadual, regional e local. Norteados pelos princípios da economia solidária, esses fóruns são também espaços de participação e empoderamento, fortalecimento e articulação da luta política, deliberação e representação do movimento da Economia Popular Solidária na esfera pública. Espaços de formação, articulação e organização que possibilitam a construção de estratégias de ações voltadas para o desenvolvimento e a sustentabilidade dos empreendimentos econômicos solidários, o fomento de redes de produção, de distribuição, comercialização e consumo, compras coletivas, de cooperativas e novos desenhos de políticas públicas e sociais. Como os demais fóruns, trata-se de um movimento não apenas reivindicativo, mas também propositivo, pautando ao poder público, políticas públicas de fomento e de desenvolvimento sustentável. As reuniões acontecem conforme planejamento e convocação da coordenação eleita pelos seus representantes.

A organização dos Fóruns de Economia Solidária é fruto do processo histórico que culminou no I Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre (RS), em janeiro de 2001. Nesse evento foi constituído um Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia

Solidária (GT/Brasileiro), composto de redes e organizações de uma diversidade de práticas associativas do segmento popular solidário. As doze entidades e redes nacionais que em momentos e níveis diferentes participavam do GT/Brasileiro e da articulação desse grupo foi constituído um fórum de âmbito nacional e a realização das plenárias e a elaboração dos princípios da Economia Solidária foram decisivas para ampliar e caracterizar seu campo de ação. Faltava uma política pública nacional de Economia Solidária e um processo de enraizamento, constituído por meio de empreendimentos de economia solidária e empresas de autogestão nas diversas regiões do país.

No caso de Minas Gerais, o Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária é constituído pelo conjunto dos fóruns regionais. Considerando a extensão geográfica do estado e seus 853 municípios, atualmente são quinze os fóruns regionais em Minas Gerias e essa articulação em fóruns regionais tem sido possível, graças ao apoio de entidades de apoio e fomento, gestores públicos e universidades. É importante destacar ainda que



tais processos organizativos e políticos decorrem de lutas por distribuição e reconhecimento promovidos pelos movimentos sociais, sindicais e eclesiais ligados às Comunidades Eclesiais de Base e às centrais sindicais como a Central Única dos Trabalhadores, dentre outras, e partidos de esquerda.

A estrutura organizativa dos fóruns de economia solidária tem os mesmos modelos, tanto na esfera nacional, como nas esferas estadual regional e local. As comissões de trabalho são constituídas e todas elas, de acordo as possibilidades de seus integrantes, organizam uma agenda de trabalho e calendário de reuniões nas quais são deliberadas ações e estratégias comuns. Atualmente, em Minas Gerais, estão constituídas as seguintes comissões: marco legal; formação; comunicação e finanças solidárias. Dessas comissões, o trabalho em redes, por ramo de atividade⁸ ganha visibilidade. Esses fóruns, além de serem espaços onde o movimento constrói suas reivindicações, são também, espaços de representação, diálogo e articulação, propícios para a troca de saberes, discussão de políticas públicas e fortalecimento do trabalho coletivo e autogestionário no campo da economia popular solidária.

Neles, os diversos atores sociais se encontram para exercer a participação democrática, socializar experiências, reivindicar direitos e deliberar sobre suas lutas. Processos organizativos e políticos nos quais são desafiados a protagonizar, na construção de uma agenda positiva para o desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários.

Outra instancia de participação e deliberação na esfera pública são os conselhos de direitos. Os conselhos de direitos são órgãos colegiados, permanentes e deliberativos, responsáveis pela formulação, fiscalização, promoção, defesa de direitos e das políticas públicas. Dito de modo diferente, são mecanismos legais e institucionais de controle social; espaços democráticos de decisão e de participação social na construção de políticas públicas. Nesta perspectiva, o Conselho Estadual de Economia Popular Solidária (CEEPS⁹) é também um importante espaço de articulação sociopolítica, ferramenta de monitoramento no controle social de políticas públicas e de ações governamentais voltadas para este público. Constituído por 12 (doze) membros efetivos, com representação paritária de órgãos públicos e entidades civis afetas ao desenvolvimento da Economia Popular Solidária, os membros do CEEPS são nomeados pelo Governador do Estado para mandato de dois anos.

Não obstante a importância da participação cidadã desses trabalhadores nesses processos organizativos e políticos, percebe-se também certa insatisfação entre seus



integrantes, evidenciando, inclusive, situações conflituosas nas relações de parcerias construídas com órgãos governamentais. É o que podemos observar no relato abaixo:

Nós não queremos migalhas. Queremos mudar o foco da política e da economia. Repensar ações que ajudem a pensar a vida, o bairro, a sobrevivência, a cultura. Buscar potencializar o desenvolvimento local sustentável, à luz da economia voltada para a comunidade. Como pensar o município, o Estado nesta perspectiva? Mudar totalmente o paradigma de desenvolvimento. E aí também a Economia Solidária faz uma denúncia. Não adianta ficar com pequenas coisas, apenas com o discurso. É preciso fazer mudanças radicais. Repensar a economia, repensar o Estado. [...] Os desafios são muito grandes, mas também nos alegra saber que o povo está se empoderando e vendo que é possível. Vendo que um outro mundo é possível e uma outra economia de fato acontece. No entanto, se faz necessário mudanças na política e também nas nossas finanças, porque da forma como o sistema financeiro está estruturado, seja no Brasil, seja no mundo, é um impeditivo para o crescimento da proposta da Economia Solidária. Ele acaba permitindo algumas migalhas, algumas concessões. A gente sabe que a política faz isso, ela cria concessões, algumas brechas onde as pessoas conseguem ter algumas participações, mas ela não faz mudança no eixo. O eixo político ainda é patriarcal, autoritário, de cima para baixo, em que uma minoria pensante pensa para uma maioria e tenta ser beneficiária desta proposta, contra a proposta de democracia, contra o povo e para o povo.¹⁰

A Universidade do Estado de Minas Gerais, por meio de seus projetos de pesquisa e extensão tem acompanhado a caminhada de empreendimentos de economia popular solidária e sua participação no Fórum Regional Vertentes de Economia Popular Solidária. A participação nesses espaços tem sido uma ferramenta importante para os alunos bolsistas e não bolsistas envolvidos no Projeto, sem contar a interface com disciplinas dos Projetos Político Pedagógico dos cursos de Pedagogia e Ciências Sociais oferecidos pelo Instituto Superior de Educação “Dona Itália Franco” - UEMG Barbacena. O diálogo com organizações da sociedade civil e com órgãos do Poder Públicos tem possibilitado não somente a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, mas também maior integração entre teoria e prática, no que diz respeito à formação humana e acadêmica dos alunos.

O Conselho Estadual de Economia Popular Solidária (CEEPS¹¹) é também um importante espaço de articulação sociopolítica, ferramenta de monitoramento no controle social de políticas públicas e de ações governamentais voltadas para este público. Constituído por 12 (doze) membros efetivos, com representação paritária de órgãos públicos e entidades civis afetas ao desenvolvimento da Economia Popular



Solidária, os membros do CEEPS são nomeados pelo Governador do Estado para mandato de dois anos.

Considerações finais

As iniciativas de economia solidária tem um rosto feminino e a organização das mulheres em suas iniciativas de trabalho em redes, cada vez mais são consolidadas não somente em Minas Gerais, mas também em outras regiões do Brasil. Se por um lado essas iniciativas representam a descoberta de novas estratégias organizativas, revelam também a perversidade do modelo capitalista de produção e consumo, que cada vez mais atinge as mulheres, gera novas formas de segregação, aprofunda desigualdades e contribui para que parcelas significativas da população permaneçam excluídas do acesso aos bens e serviços essenciais. Um cenário no qual desemprego estrutural e/ou novas configurações do mundo do trabalho, configure novas antigas exclusões, reafirmando situações precárias anteriores, de modo que trabalhadores historicamente excluídos permanecem na informalidade submersos no trabalho precarizado e em condições de extrema vulnerabilidade.

A participação nos fóruns e no Conselho Estadual de Economia Popular Solidária tem contribuído para o fortalecimento da cidadania, uma vez que potencializa a participação dos sujeitos, a formação sociopolítica e o exercício dos princípios da autogestão. Lideranças integrantes desses coletivos afirmam sua importância e seu papel estratégico para que a economia popular solidária, mais que uma política de governo se constitua em políticas de Estado no que se refere à implementação de políticas públicas emancipatórias.

As experiências analisadas apontaram para a necessidade de maior investimento na formação humana e gerencial, de fortalecimento dos fóruns de economia solidária, bem como o desafio de potencializar o trabalho em redes de produção, comercialização e consumo solidário. Ou seja, abrir-se a outros campos, a partir de novas possibilidades que estão escondidas nessas iniciativas. Além da necessidade de fortalecimento do trabalho e organização em redes, torna-se imprescindível também que o movimento social em defesa da economia solidária potencialize processos em vista da implementação de políticas públicas emancipatórias para este grupo social tão vulnerável.

Não obstante as questões problematizadoras que dizem respeito aos desafios e dilemas da economia popular solidária nos territórios acompanhados é inquestionável a necessidade de valorizar essas experiências e iniciativas. São alternativas de produção,



de caráter não apenas econômico, mas também experiências holísticas. Seu potencial emancipatório, sua perspectiva de êxito e organização comunitária vão além dos processos econômicos, associados às atividades produtivas e dinâmicas integradas a processos culturais, afetivos, sociais e políticos. Os desafios a serem cotidianamente enfrentados e superados são inúmeros, no entanto, os ganhos não-econômicos reafirmam mudanças significativas, sendo possível, inclusive, visualizar o antes e o depois da inserção desses sujeitos sociais nos empreendimentos de economia popular solidária.

Enfim, os desafios são muitos e o maior deles é prosseguir na busca dos fios que tecem a teia de uma educação popular para a autogestão e autonomia, processos de subjetivação e construções identitárias que contraponham o modelo hegemônico de produção e consumo capitalistas, possibilitando assim, as condições objetivas e subjetivas para a reprodução ampliada da vida e vida de qualidade. Processos organizativos e políticos ainda em construção, em uma conjuntura de sucessivas e profundas mudanças políticas, econômicas e socioculturais.

Notas

¹ Pós-doutora em Psicologia Social (UFMG/FAFICH) doutora e mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Minas e docente pesquisadora na Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Barbacena. E-mail: carlucia.silva@uemg.br

² Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) 2002; Especialização em Metodologia do Ensino de Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) 2009. Mestre em Geografia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) 2015. Atualmente é professora na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) no curso de Pedagogia. Atua nas áreas de educação, patrimônio e metodologia do ensino de geografia. E-mail: helania.martins@yahoo.com.br

³ Nova modalidade de contratação do trabalhadores, prevista na Lei Federal nº13.467/2017, mais conhecida como a Lei da Reforma Trabalhista.

⁴ Santos (2002); Santos (2003); Dagnino (2000); Dagnino (2002); Dagnino (2004); Alvarez, Dagnino e Escobar (2000), dentre outros.

⁵ Barbosa (2007); Coraggio (2003); Catani (2003); Silva (2009); Silva (2014).

⁶ Com o advento do Governo Lula (2002 – 2010), foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e nos Governos Lula e Dilma buscou-se dar um impulso a essas iniciativas. No entanto,



após o impeachment contra Dilma Rousseff foram extintos o Ministério de Trabalho e a SENAES.

⁷ Barbosa (2007); Souza (2000); Souza (2004); Singer (2002); Gaiger (2007), Dentre outros.

⁸ Na atualidade, são três as redes de produção, comercialização e consumo, ou seja: redes de confecção, rede de alimentação e rede de artesanato. Cada uma dessas redes planejam suas estratégias de ações e as deliberações são socializadas nas reuniões dos fóruns.

⁹ O Conselho Estadual da Economia Popular Solidária – CEEPS, criado pela lei nº. 15.028, de 19 de janeiro de 2004 e tem por finalidade deliberar e propor diretrizes, políticas e ações de fomento à economia popular solidária.

¹⁰ Plenária “Democracia Participativa e o fortalecimento do Controle Social: uma agenda necessária”, realizada no I Encontro Mineiro Da Economia Popular Solidária: Diálogos para fortalecer a Democracia, a Rede de Cooperação e o Desenvolvimento Social, ocorrido em Belo Horizonte, nos dias 4, 5 e 6 de julho de 2018.

¹¹ O Conselho Estadual da Economia Popular Solidária – CEEPS, criado pela lei nº. 15.028, de 19 de janeiro de 2004 e tem por finalidade deliberar e propor diretrizes, políticas e ações de fomento à economia popular solidária.

Referências

Alvarez, Sonia E.; Dagnino, Evelina; Escobar, Arturo. Introdução: O cultural e o político nos movimentos sociais latino-americanos. In: Alvarez, Sonia E.; Dagnino, Evelina; Escobar, Arturo. (Org.). *Cultura e política nos movimentos sociais Latino-Americanos: novas leituras*. Belo Horizonte: UFMG, 2000, p. 15-57.

Antunes, Ricardo. Fordismo, Toyotismo e acumulação flexível. In: Antunes, Ricardo. *Adeus ao trabalho? ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho*. 4 ed. São Paulo: Cortez. 2006a. p. 15-33.

Antunes, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. In: Antunes, Ricardo. *Riqueza e miséria do trabalho no Brasil*. São Paulo: Boitempo. 2006b, p. 30-45.

Antunes, R. *O privilégio da servidão: O novo proletariado de serviço na era digital*. Boitempo Editorial, 2018.

Araújo, A. M. C. Informalidade e relações de gênero. In: Georges, I. P. H; LEITE, M. de Paula. (Org.) *Novas configurações do trabalho e economia solidária*. São Paulo: Annablume, 2012. p. 135-172,



- Barbosa, R. N. C. *A economia solidária como política pública: uma tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil*. São Paulo: Cortez, 2007.
- Carvalho, José Murilo de. Cidadania a porrete. In: Carvalho, José Murilo de. *Pontos e Bordados: escritos de história e política*. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 307-309.
- Carvalho, José Murilo de. *Cidadania no Brasil: o longo caminho*. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 236.
- Cattani, A D. A outra economia: os conceitos essenciais. In: Cattani, A D. (Org.). *A Outra Economia*. Porto Alegre: Veraz. 2003, p. 9-15.
- Coraggio, J L. Economia do Trabalho. In: Cattani, A D (Org.) *A outra economia*. Porto Alegre: Veraz Editores. 2003, p. 88-95.
- Dagnino, Evelina. Cultura, Cidadania e Democracia: a transformação dos discursos e práticas na esquerda latino-americana. In: Alvarez, Sônia E., Dagnino, E., Escobar, A. (Org.). *Cultura e Política nos Movimentos Sociais Latino-Americanos: novas leituras*. Belo Horizonte: UFMG, 2000, 61-102.
- Dagnino, Evelina. (Org.) *Sociedade civil e espaços públicos no Brasil*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
- Dagnino, Evelina. *Os anos 90: política e sociedade no Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 2004.
- Gaiger, L I. A outra racionalidade da economia solidária. Conclusões do primeiro Mapeamento Nacional no Brasil. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 79, Dezembro 2007: 57-77. Disponível em <https://journals.openedition.org/rccs/725> Acesso em 23 jul. 2019.
- Hasenbalg, Carlos. A relação senhor/escravo. In: Hasenbalg, Carlos. *Discriminação e desigualdade raciais no Brasil*. 2. ed. Belo Horizonte. Editora UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ, 2005, p. 35-66.
- Neves, M A. Dilemas dos empreendimentos solidários: entre a precarização e a inserção social. In: LEITE, M P, Georges, I P. H. *Novas configurações do trabalho e economia solidária*. São Paulo: Annablume; FAPESP, 2012. p. 323-349.
- Santos, Boaventura de Souza; Avritzer, Leonardo. Para ampliar o cânone democrático. In: Santos, Boaventura de Sousa. (Org.) *Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa*. 2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 39-82.
- Santos, Boaventura de Souza; Rodríguez, César. Introdução: para ampliar o cânone da produção. In: Santos, Boaventura de Souza (Org.). *Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2002, p. 1-77.



Silva, C. M. *Experiências de economia popular solidária na região metropolitana de Belo Horizonte: observações, percepções e papéis de agentes mediadores e de atores sociais*. 2009. 189f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Silva, C. M. *Trabalho, cidadania e reconhecimento: a Rede CATAUNIDOS e o protagonismo sociopolítico de Catadores de Recicláveis na RMBH*. 2014. 395f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Singer, P. *Introdução à economia solidária*. São Paulo: Perseu Abramo. 2002.

Singer, P. A Economia Solidária: um modo de produção e distribuição. In: Singer, P; Souza, A (Org.). *A Economia Solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego*. São Paulo: Contexto, 2000, p. 11-28.

Souza, A R. Os empreendimentos comunitários de São Paulo. In: Singer, P.; Souza, A (Org.). *A Economia Solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego*. São Paulo: Contexto. 2000, p. 245-266.

Souza, A R. Um instantâneo da economia solidária no Brasil. In: Singer, P; Souza, A (Org.). *A Economia Solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego*. São Paulo: Contexto. 2000b, p. 7-10.

Souza, J. A Dimensão Política do Reconhecimento Social. In Avritzer, L; Domingues, J M (Orgs.). *Teoria Social e Modernidade no Brasil*. Belo Horizonte: UFMG, 2000. p. 158-184.



La nueva elite política brasileña: Reconfiguración del Estado y desafíos para la movilización popular

Victoria Darling¹

Resumen

A partir de la asunción de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil se delineó un nuevo esquema de poder caracterizado por la conformación de una nueva elite política. La investigación que presentamos problematiza el perfil que el Estado asumió a la luz de varios aspectos. Por un lado, abordamos la “colonización del Estado” (Castellani, 2018), esto es, la asunción de cargos de dirección en Ministerios (cargos de primera y segunda línea) por parte de CEOs o directores de empresas privadas con la finalidad de detectar conflictos de intereses o captura de la decisión estatal por intereses privados en perjuicio del bien público. Se realiza con este fin un análisis del Gabinete Nacional identificando trayectorias señalizando posibles conflictos de intereses. En segundo término, a partir de la frase del Presidente “Nao entendo mesmo de economia” (*O Globo*, 21-07-2018), en franca pretensión de dejar librado a miembros del Gabinete la conducción del sector, analizaremos el área de Economía visualizando el tipo de *complejo económico-estatal* (Schvartzter, 1979) creado, en términos de articulación entre el sector público y privado en relación a un conjunto de actividades de producción (siderurgia, petroquímica, obras de infraestructura) que perfilan el proyecto de país en construcción. Finalmente, cerramos con notas sobre la violencia como instrumento ideológico legitimador de un orden social que, sin cuestionar la desigualdad, prefigura a través de la condena a la perspectiva de género, raza y al socialismo, un modelo de sociedad que activa un conservadurismo de larga data, volviéndolo ahora proactivo y protagonista de la política cotidiana. Todo esto, en miras a iluminar los desafíos para los movimientos populares, su acción y movilización.

Palabras clave

Brasil; Movilización; Elite política; Estado.

Introducción

Desde inicio del año 2016, presenciamos en Brasil un escenario signado por la crítica a la política como construcción colectiva fuera de los marcos institucionales. Los movimientos sociales parecieran haber sido virtualmente alejados de su papel político y han sido relegados desde el discurso oficial, al terreno de lo anti-político y disruptivo del



orden y la estabilidad. Eso encontró eco en el discurso público, alcanzando cierta hegemonía el rechazo a la movilización social.

A su vez, el 1ero de enero de 2019 asumió formalmente la Presidencia del país Jair Messias Bolsonaro. En una larga sucesión de pactos luego del fin de la dictadura militar, el gobierno actual es el último de una breve trayectoria democrática que podría considerarse aún en transición. “La Nueva República fue el régimen político que sustituyó a la dictadura militar. Su sustentación fundamental se encontró en los partidos políticos, más concretamente en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial y en la institución fuerte de la Presidencia, electa por voto directo desde 1989” (Robaina, 2018:1).

El primer mes del año, además de presentarse públicamente la figura del Primer Mandatario (electo con un total de 57 millones de votos válidos), fue también dado a conocer la composición del Gabinete de la Presidencia. El Gabinete Nacional constituye no sólo el espacio colectivo de confianza y creación de consensos para el Presidente, sino también el ámbito que opera como caja de resonancia para la emisión de pareceres y toma de decisiones que definen la orientación del gobierno.

El gabinete de Bolsonaro finalmente confirmado está compuesto por 22 representantes, dentro de los cuales hay 16 ministros, 2 secretarías y 4 órganos con *status* de ministerio. Algunos de estos representantes sufrieron modificaciones desde enero a la fecha, no obstante, la modificación de titularidad de las carteras no implicó la modificación de las carteras en sí ni de su vínculo con otras. La relevancia de los Ministerios radica en su capacidad de crear políticas públicas, desarrollar programas federales y alcanzar una buena comunicación con los sectores que representan. Son responsables por la orquestación de políticas para el sector y para el establecimiento de prioridades que serán consideradas en el tipo de uso del presupuesto público que realicen.

Los ministerios y espacios institucionales que componen el Gabinete del Ejecutivo en el presente son: la Casa Civil, el Ministério de Justiça e Segurança Pública, el Ministério da Defesa, el Ministério das Relações Exteriores, el Ministério da Economia, da Infraestrutura, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, da Saúde, de Minas e Energia, Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, Ministério do Meio Ambiente, do Turismo, Ministério de Desenvolvimento Regional, Ministério da Controladoria Geral da União, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Secretaria Geral da Presidência, Secretaria de Governo da



Presidencia da República, Ministério de Segurança Institucional, Advocacia Geral da União, e Presidencia do Banco Central.

De un total de 22 cargos, ocupan espacios de dirección en carteras ejecutivas 10 militares, y sólo 2 mujeres. Considerando la importancia de los poderes ejecutivos en países hiper-presidencialistas como el que habitamos, analizando la trayectoria de los y las miembros del colegiado que nortea la construcción estatal, pretendemos analizar el los roles y la representación de intereses que en el gobierno se expresa. Aquello que nos preguntamos inicialmente era si existía una virtual “colonización del Estado” (Castellani, 2018), esto es, la asunción de cargos de dirección en Ministerios por parte de CEOs o directores de empresas privadas. La pretensión era detectar conflictos de intereses o captura de la decisión estatal por intereses privados en perjuicio del bien público. No obstante, en el avance de la investigación, a diferencia de lo previsto, a través del análisis de trayectoria del gabinete nacional observamos mucho menos el peso de la influencia de agentes de empresas privadas, y más, la presencia de intereses vinculados a la corporación castrense.

A su vez, a medida que el primer año de gobierno avanzaba, los escándalos revelados por los medios de comunicación que parecían poner al gobierno en crisis, se asociaban al discurso belicista en relación a las mujeres, ridiculizando su papel y presencia pública, fortaleciendo la pretensión armamentista, visibilizando una idea de masculinidad. Esto nos llevó a virar el rumbo de la investigación y centrarnos en el perfil de gobierno que se estaba constituyendo entendiendo que la atención dada desde la esfera pública a la vida pública y privada de las mujeres ganaba centralidad.

Las preguntas que formulamos son las siguientes: ¿Qué intereses representan los miembros del gabinete nacional de Bolsonaro? ¿En qué se sustenta la obstinación por el reforzamiento de los roles masculino y femenino? ¿Qué rol les cabe a los militares en las políticas del gobierno? ¿Qué características tiene el perfil de las Ministras Tereza Cristina y Damares Alves, miembros activas del gabinete y círculo de confianza del Presidente?

Abonamos la tesis de Rita Segato que sostiene que “Nuestros estados fueron arquitectados para que la riqueza repasada pudiera ser apropiada por las elites fundadoras; hasta hoy la vulnerabilidad a la apropiación es la característica de su estructura, de forma que cuando alguien no perteneciente a esas élites ingresa al ámbito estatal, se transforma en élite como efecto inexorable de formar parte de ese ámbito de gestión siempre exterior y sobrepuesto (Segato, 2015).



En esa línea, la hipótesis que sostenemos es que “el regreso” a un discurso moralista nutrido de valores tradicionales, como patria, iglesia y familia, constituye una expresión de salvataje de una élite política representante de intereses corporativos que se siente amenazado por la potencia transformadora de las mujeres y los sectores populares politizados. Esto contribuye a la necesidad de un proyecto refundacional del Estado en Brasil, sustentado en un nuevo discurso.

En la criminalización de las acciones feministas y de los movimientos sociales (el MST, el MAB y el MAM, entre otros), subyace un temor no declarado a la potencia de transformación política presente en la acción colectiva.

¿Y las mujeres dónde están?

El perfil de las mujeres seleccionadas para participar de la máxima plana del gobierno constituye una demostración del modelo de mujer que se espera, “pueda servir al Brasil de hoy”. Conocer la trayectoria de las dos mujeres actualmente en carteras estratégicas puede ser útil en términos de reflejo y construcción de representaciones sociales en torno de la mujer en el Estado, en particular del Presidente y su vice que sabemos, están formados en valores propios de una academia militar no transitada por el género femenino.

Definimos teóricamente al concepto de trayectoria como *la experiencia vital que transcurre en un doble vínculo entre procesos estructurales e historias personales/profesionales*. De esta manera, nos animamos a leer las trayectorias de las ministras con el fin de descifrar los intereses que se encuentran cristalizados en la actual correlación de fuerzas.

Tereza Cristina Corrêa

Es actualmente la Ministra de Agricultura, Pecuária y Abastecimento. Diputada de Partido (DEM) Democratas. Ella presidía hasta 2018 un grupo político que defiende abiertamente los intereses de los grandes propietarios rurales en el Congreso. Oriunda de Campo Grande, es graduada en Ingeniería Agrónoma y proviene de una familia tradicional de base agropecuaria que tiene una extensa trayectoria política. Su bisabuelo Pedro Celestino Corrêa da Costa y su abuelo Fernando Corrêa da Costa, fueron gobernadores del estado de Mato Grosso. Por muchos años, en Sao Paulo, ella se dedicó a trabajar en la comercialización de hacienda de una compañía privada. Luego, comenzó a tener participación activa en gremiales agropecuarias locales. Ella ha sido impulsora del proyecto de Ley N° 6299/02 de 2002, que propone una agilización de las



gestiones para regular el uso de agroquímicos. El proyecto logró dictamen favorable. Debido a eso, militantes ambientalistas la calificaron como la “musa del veneno”.

A mediados del año 2018, una investigación periodística descubrió que la empresa familiar de Tereza Cristina arrienda un campo al grupo de comercialización de carne JBS, donde opera un feedlot. Si bien ella negó que eso genere un conflicto de intereses, las sospechas persisten (Valorsoja, 10-11-2018). El site oficial de la Ministra afirma que “Tereza iniciou sua vida profissional ainda muito jovem. Após formar-se em Engenharia Agrônômica pela Universidade Federal de Viçosa (Minas Gerais), mudou-se para São Paulo trabalhando em diversas empresas multinacionais do setor de alimentos. Um dos destaques dessa fase foi a introdução da raça Brangus no Brasil. Retornando para o Mato Grosso do Sul, assumiu a administração dos negócios da família, onde segmentou os negócios e profissionalizou a gestão” (Terezacristinams, 08-09-2019). Dichas afirmaciones anticipan una orientación política y una dirección de prácticas destinadas a favorecer a los sectores ruralistas concentrados.

Damares Alves

Es la segunda mujer que participa dirigiendo una cartera del Poder Ejecutivo. Damares es pastora evangélica, representante del Protestantismo y cuenta con el grado de abogada. Actualmente preside el Ministerio de la Mujer, la familia y derechos humanos. En febrero de 2019, fue revelado que la Ministra habría adoptado irregularmente a una niña indígena. De hecho, debido a las denuncias realizadas, se solicitó la investigación por parte del Ministerio Público Federal.

“Há 15 anos, segundo relatos de diversos integrantes da Aldeia Kamayurá, no Xingu, Kajutiti Lulu Kamayurá foi levada por Damares, a pretexto de realizar um tratamento dentário. A criança, então com 6 anos, não retornou, e a adoção jamais foi formalizada (...) Houve uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Índio”, afirmó la diputada Jandira Feghali del PCdoB (Portinari en O Globo, 02-01-2019). Damares ha adquirido visibilidad pública mucho más por sus dichos que por las políticas públicas promovidas desde enero. El mismo día de su asunción, afirmó que estaba inaugurándose una “nueva era” en Brasil en la cual todo “menino veste azul e menina veste rosa”. Otras manifestaciones públicas generaron polémica como cuando dejó transparentar ‘Deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas’. Según ella, la Iglesia perdió espacio en la sociedad nacional cuando dejaron entrar la teoría de la evolución en las escuelas.



El perfil de ambas ministras denota el carácter de los debates en que ambas participan. En tiempos de disputa por la conquista de derechos sociales y políticos en América Latina, ambas se posicionan en el moralismo y la preservación de valores conservadores como familia y latifundio. El Presidente eligió a Ministras que realizan este tipo de afirmaciones a sabiendas de un modelo de mujer aceptable para el Brasil de hoy.

Como dato que refuerza esta idea, recientemente, la Ministra Damares lanzó una campaña de donación de bombachas con el fin de entregarlas a las niñas de la Amazonia, explotadas sexualmente. Su diagnóstico sobre la situación de pobreza y abandono, además de la vulnerabilidad de mujeres indígenas frente a situaciones de violencia sexual se justifica en la falta de ropa de interior. (Carta Capital, 25-07-2019).

Fundamentación del problema

Un Estado capturado por corporaciones: la Iglesia Pentecostal y las FFAA

La presencia de miembros de corporaciones -empresas privadas y militares- en instituciones del Estado ejerce influencia directa en las políticas públicas llevadas adelante ampliando las condiciones de favorecer intereses privados y corporativos. Esto redefine la correlación de fuerzas que estructura al Estado y su materialización en términos de disputas dominantes y con los sectores subalternos.

El regreso al vocabulario corriente de conceptos como familia, ideología, disciplina y fe, expresan la construcción de una hegemonía que lentamente gana terreno en la sociedad civil, en forma de sentido común.

La presencia militar

El primer mandatario es militar y su figura generó adeptos de los más variados espacios del ámbito de la seguridad pública. Los militares que ocupan carteras definen como áreas de interés la defensa nacional, la infraestructura, el control de los recursos estratégicos del país como minas y energía y la ciencia, tecnología, innovaciones y comunicaciones, además de la Salud. Es posible ilustrar dicha canalización de intereses a partir del conocimiento de la trayectoria de los Ministros seleccionados para ocupar los Ministerios.

Jorge Oliveira, es el actual Ministro General de la Presidencia, es miembro de la Policía Militar. Este cuerpo policial es una fuerza de seguridad pública en el ámbito de los estados y del Distrito Federal subordinada a los gobernadores y además es fuerza auxiliar y reserva del Ejército brasileño.



Luis Eduardo Ramos, es el actual Ministro de la Secretaria de Gobierno de la Presidencia. Es conocido por su pedido a dios para que le dé “a sabedoria do Salomão e a capacidade e articulação de José do Egito”. Ramos sustituyó en el cargo a Carlos Alberto dos Santos Cruz, quien fue obligado a dimitir por el Presidente en junio de este año. Ramos es de Rio de Janeiro y tiene una larga carrera en el Ejército (ingresó en la corporación en 1973). Fue Jefe del Comando de la 11ª Região Militar en Brasília, y de la 1ª División del Ejército en Rio de Janeiro. También actuó como Force Commander de la Misión de las Naciones Unidas en Haiti.

Fernando Azevedo e Silva es el tercer militar que conforma el Gabinete Nacional del Ejecutivo. Es el actual Ministro de Defensa. Azevedo e Silva es General del Ejército y realizó su carrera en la corporación militar desde 1976 hasta el 2014. Especializado en Paracaidismo y Salto, se destaca por sus capacidades atléticas. Formó parte de la Academia Militar de las Agulhas Negras. Su nombramiento fue indicado por el General Augusto Heleno Ribeiro.

Tarcísio Gomes de Freitas es el actual Ministro de Infraestructura. Es graduado de Ingeniería por el Instituto Militar de Ingeniería. Trabajó intensamente en el Ejército Brasileño y es egresado Bacharel en Ciencias Militares por la Academia das Agulhas Negras. Después de asumir como ministro anunció la privatización de 100 empresas estatales, además de abrir la concesión a privados de cinco mil kilómetros de carreteras.

Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr. es el Ministro de Minas y Energia. Es Almirante de Esquadra de la Marina y fue director de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina. Trabajó como observador de Brasil en las Fuerzas de Paz de la ONU.

Luiz Henrique Mandetta es el actual Ministro de Salud. Es un médico Traumatólogo formado en la Universidade Gama Filho. Fue médico militar en el Hospital Central del Ejército con el puesto de Teniente.

Marcos Pontes es el Ministro de Ciencia, Tecnologia, Innovaciones y Comunicaciones. El astronauta. Es teniente coronel de la Fuerza Aérea, funcionario de la Agencia Espacial y único brasileño que viajó al espacio. En 2006 integró una misión de la NASA a la Estación Espacial Internacional.

Wagner Rosário es el responsable de la Controladoria Geral da Uniao. Continúa en el cargo ocupado durante el gobierno Temer. Es graduado en Ciências Militares por la Academia das Agulhas Negras con maestría en Combate a la corrupción y Estado de derecho por la Universidad de Salamanca. Actuó como Oficial do Ejército.



Augusto Heleno es General del Ejército. Es el actual Ministro del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia. Es el primer comandante brasileño de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (2004-2005) y estuvo a cargo del Comando Militar de la Amazonia entre 2007 y 2008. También se formó en la Academia Militar das Agulhas Negras.

Jair Messias Bolsonaro, el actual Presidente de la República, es militar retirado del Ejército. En 1974 ingresó a la Academia Militas das Agulhas Negras, formándose en 1977. Integró la Brigada de Infantería Paracaidista en Rio de Janeiro y se especializó en Educación Física. En 1986 publicó un artículo en la revista *Veja* en el que se quejaba por los bajos salarios de las fuerzas de seguridad, ese acto le valió 15 días de arresto. Años después realizaría amenazas de toma de oleoductos y un cuartel general generando rechazo en la fuerza. En 1988 Bolsonaro fue a la reserva del Ejército incursionando de ahí en adelante en la vida política del país.

Cabe aclarar que, recientemente, una encuesta de Datafolha mostró el número de brasileiros y brasileiras que afirman conocer a los ministros actuales. La pesquisa abarcó 2.878 casos de 175 municipios de Brasil. Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) es conocido por un 94% de los encuestados. Paulo Guedes (Economia) por el 81%. Tarcísio Freitas (Infraestrutura) por 37%, Ricardo Salles (Meio Ambiente) por un 52%, Abraham Weintraub (Educação) por un 31%. (O Globo sobre Datafolha, de septiembre de 2019).

La mayoría de los funcionarios del Gabinete provienen del Ejército y otros, del círculo de formación del presidente durante su paso por la Academia das Agulhas Negras.

Localizada en Resende, Rio de Janeiro. La AMAN (Academia Militar Agulhas Negras) es la única escuela de enseñanza superior para militares, heredera de la Real Academia Militar de 1810. Las fuerzas que la academia reúne son Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería y Comunicaciones, todas pertenecientes al Ejército. La formación de la escuela es de 4 años, con interinatos y prácticas militares. El acceso a la misma está normatizado por un concurso de difícil acceso que se realiza en la ciudad de Campinas. La propuesta de la academia es el desarrollo de atributos específicos de las áreas afectiva, cognitiva y psicomotora necesarios para la profesión militar. La malla curricular cuenta con disciplinas ligadas a lo que denominan Ciencias Militares, exactas y humanas. El título de egreso es el de Bacharel em Ciências Militares.



El Presidente, su vice y 5 ministros del Gabinete realizaron allí su formación superior. Los valores que la AMAN promueve se caracterizan por el valor de la colectividad y la camaradería, no obstante, "convive com a competição meritocrática, expressa na classificação escolar, que é muito importante: classificação é antiguidade; e antiguidade, como diz o ditado militar, é posto" (Castro, 2004).

La escuela crea un tipo de socialización masculina firmemente cohesionada. Recién en el año 2018 fueron admitidas las primeras mujeres. De 414 cadetes, ingresaron 33 mujeres (Moury, 2018). Además, por primera vez en 2019 fue abierta una turma con cuota racial para ingresantes negros.

Si existe un norte claro en la escuela, además de la especificidad competitiva signada por atributos biológicos y de mérito (fuerza, altura, resistencia) este objetivo es el de modelar el trabajo, el esfuerzo y las prácticas a una rigurosa disciplina, y la obediencia a la jerarquía.

Es posible establecer un vínculo entre estos atributos, valores y habilidades de formación, y las ideas promovidas desde el actual gobierno. Sin lugar a dudas, el ejercicio del poder político está estructurado en estas concepciones y perspectivas respecto de lo social y de lo que es considerado justo o injusto, propio o impropio, aceptable o del todo reprobable. Las mujeres nunca fueron parte igual que los militares, y menos aún, la población negra, de la cual no existía representación. Más aún, no sólo puede considerarse clave en la construcción y reproducción de un sentido común la vara diferenciada para mujeres y negros, sino también, la falta de un sentido crítico al periodo de dictadura militar en Brasil.

Por otra parte, el Ejército Brasileiro nunca realizó, hasta el presente, una autocrítica en relación a la dictadura militar. En ese sentido, la visión de aquel periodo que se trasmite a los cadetes en formación en la AMAN es que *la dictadura fue un periodo bueno para el desarrollo del país*. El Coronel Ávila, Jefe de la División de Enseñanza de la academia afirma que el gobierno de facto, militar, es llamado en la escuela "periodo de contrarrevolución".

"Não se fala em ditadura nem se usa esse termo, golpe. É isso que é colocado aqui, de maneira muito clara. A história é contada como ela é, como aconteceu, sem viés ideológico político" (Avila en Dias Carneiro, 2019). La política desde esta óptica se traduce también en una apuesta que debe aspirar a no tener viés ideológico. De ese



modo, ideología se entiende desde este lugar como el espacio de crítica al periodo militar, a la lectura crítica de la desigualdad racial y claro, a la cuestión de género.

El combate a la ideología de género

Ideología de género es un concepto utilizado por los críticos que rechazan las ideas y luchas del movimiento feminista. El feminismo se asocia al conjunto de ideas que apuntan a la corrosión de los lazos familiares, entendiendo por familia, el grupo nuclear de una pareja heteronormativa.

Las raíces del concepto de género se remontan a la teoría feminista del año 1969, en que, entre otras obras, fue publicado el libro *Sexual Politics*, de Kate Millet. Allí, se afirma que “Al nacer no hay ninguna diferenciación entre los sexos. La personalidad psicosexual se forma, por consiguiente, en la fase posnatal y es fruto de aprendizaje”. En los años 80, el concepto género se volvió frecuente en los currículos de estudio de la cuestión femenina. “Con la introducción del concepto de *género* como construcción social, el interés del movimiento feminista se desvió de la eliminación de las políticas desfavorables para la mujer a la atención hacia todo lo que admitía la existencia de diferencias entre el hombre y la mujer, especialmente todo lo que se realizaba en apoyo de la mujer en cuanto principal fuente de asistencia en el ámbito doméstico. Un futuro sin género suponía una sociedad que examinara meticulosamente todos los aspectos de la cultura para encontrar pruebas de la socialización de género” (O Leary, 2004).

El debate sobre la importancia del concepto de género se consolidó mundialmente en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995. En dicho encuentro, portavoces de la Iglesia Católica se opusieron a la utilización del concepto “género” e iniciaron un debate que arribó a la antigua discusión entre ciencia y religión, aterrizado al tema de las mujeres y sus determinaciones.

En América Latina, el debate sobre la llamada ideología de género cobró fuerza a partir de la Quinta Conferencia General del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe) a través del “Documento de Aparecida”. Allí se afirma que “la ideología de género no considera diferencias dadas por la naturaleza humana y ha provocado modificaciones legales que hieren gravemente la dignidad del matrimonio, el respeto al derecho a la vida y a la identidad de la familia” (Miskolci y Campana, 2017). A su vez, en 1998 ya habían publicado un texto llamado “La ideología de género, sus peligros y alcances” asociando la perspectiva de género con el marxismo y el ateísmo y por tanto, al riesgo de correr la familia tradicional y la unión en matrimonio.



El católico argentino Jorge Scala reforzó este presupuesto publicando en 2010 “Ideología de género, el género como herramienta de poder”, texto que fue traducido en Brasil con el nombre: “Ideología de género, neototalitarismo e morte da família”.

En Brasil, el debate se profundizó en 2010 con el Proyecto de ley 8035/10 que proponía la incorporación al Plan Nacional de Educación 2011/2012 de un artículo en que se relatara que la superación de las desigualdades educacionales deberá hacer “énfasis en la promoción de la igualdad racial, regional, de género y orientación sexual”. La propuesta del Poder Ejecutivo disparó un intenso debate entre parlamentarios, obispos, sacerdotes y pastores (Campos Machado, 2018). El proyecto sufrió modificaciones y fue finalmente aprobado por ambas cámaras sin los conceptos género y orientación sexual.

Las investigaciones existentes en Brasil sobre los vínculos entre religión y política muestran que más allá de las bancadas de grupos pentecostales y evangélicos de diferentes ramas, existen actores religiosos como sacerdotes que se dedican al trabajo de asesoría parlamentaria, lobby y presión para incorporar sus ideas al debate en comisiones (Machado, 2018).

Lo novedoso después de estos años y posteriormente a la destitución de la Presidenta Dilma, fue la ampliación del frente de disputa y la convocatoria de las iglesias a mujeres jóvenes y con formación superior para la lucha contra la ideología de género a través de ONGs, grupos Pro-Vida y en favor de la familia tradicional brasilera. Este movimiento llegó incluso a tener impacto en la derogación del Comité de Género dentro del Ministerio de Educación en 2016.

Finalmente, el hecho más significativo en términos de definición política ocurrió en 2016. Se trata del Programa *Escola Sem Partido*, que instituye en las directrices de la educación nacional la afirmación “el poder público no se inmiscuirá en la opción sexual de los alumnos ni permitirá cualquier práctica capaz de comprometer, precipitar o direccionar la madurez natural y desarrollo de su personalidad en armonía con la respectiva identidad biológica de sexo, siendo vedada, especialmente, la aplicación de postulados de la teoría o ideología de género” (PLS 193). En septiembre de este año, después de multitudinarias movilizaciones, el proyecto *Escola Sem Partido* fue rechazado.

Metodología

La investigación realizada se encuentra aún en proceso. Presentamos sólo los primeros elementos hallados, base para un análisis futuro de mayor profundidad.



En esta primera fase, en una primera instancia, la recolección de datos se realizó reconstruyendo la trayectoria vital de los y las miembros del gabinete nacional. Este trabajo se realizó estudiando las hojas de vida de los Ministros y a través de datos relevantes o curiosos, a través de una pesquisa de mayor profundidad en sites no oficiales, archivos estatales y trabajos de tesis de los propios funcionarios. Luego, se realizaron redes de relación entre ellos con el fin de identificar patrones. Para este proceso de relevamiento, se elaboró una matriz sistematizadora.

En segunda instancia, realizamos una revisión hemerográfica siguiendo el periódico Folha de Sao Paulo. Se escogió este diario por su presencia a nivel nacional y porque tiene menos vínculos declarados que el multimedio O Globo. Ambos pueden considerarse los de mayor presencia y reconocimiento público. El seguimiento de Folha fue realizado desde enero de 2019, asunción del nuevo gobierno, hasta el mes de octubre, con el fin de identificar elementos empíricos que exponen la existencia de un relato conservador, moralista, que destaca prácticas de militares y condena la llamada ideología de género.

Resultados

Los resultados obtenidos hasta el momento apuntan a fortalecer la idea de que el discurso anclado en valores conservadores sustenta las prácticas de gobierno. A su vez, la exaltación de los militares y las nociones que su formación otorga así como la condena a la llamada ideología de género, se convirtieron en ejes de política pública. Esto puede evidenciarse en el privilegio a las pensiones militares discutidas en el marco de la reforma previsional y con el proyecto Scola Sem partido, promovido por el Ejecutivo. Resta aún profundizar otras cristalizaciones de estos intereses cristalizados en el gobierno, no obstante, su seguimiento deberá realizarse poniendo en práctica otras metodologías.

Discusión

La misoginia y las bromas

Recientemente ocurrió un altercado que alcanzó visibilidad pública nacional e internacional sin redundar en un escándalo diplomático. El presidente Bolsonaro, cuestionando el diálogo de apertura de las negociaciones para un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, bromeó comparando la belleza de su actual mujer, Michelle Bolsonaro, con la esposa del primer mandatario francés, Brigitte Macron.

Sobre las declaraciones del Presidente, el Ministro de Economía Paulo Guedes, en su conferencia "A Nova Economia do Brasil - o impacto para a região Nordeste",



manifestó: "Eu tô vendo o progresso em várias frentes, mas nada disso... é... tudo isso é assim... a preocupação é assim: xingaram a [Michele] Bachelet, xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. Macron falou que tão botando fogo na floresta brasileira e o presidente devolveu: 'que a mulher dele é feia, por isso ele tá falando isso'. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. Presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Não existe mulher feia, existe mulher observada do ângulo errado". Las declaraciones del Ministro generaron risas y aplausos entre quienes estaban en la platea.

Guedes posee un doctorado en Economía por la Universidad de Chicago. Fue considerado Superministro por Bolsonaro en virtud de una cartera que en enero de 2019 absorbió responsabilidades y funciones de otras Secretarías de Estado. Los dichos, risas y chistes compartidos por el Ministro y la entonces platea presente, arrojan preguntas sobre la conformación de un sentido común de crítica a una idea de mujer que supuestamente escapa de los cánones de belleza tradicional.

Este episodio se suma a otros en que los dichos del Primer Mandatario ofende a las mujeres. Algunos de estos "exabruptos" anteriores a ser elegido Presidente, son los siguientes:

En noviembre de 2003, Bolsonaro discutió con la diputada María del Rosario. Bolsonaro afirmó que los jóvenes menores de 16 años deberían ser imputables. Luego de que ella lo acusara de promover la violencia, él respondió: "Jamás iría estuprar você, porque você não merece".

En entrevista al jornal Hora Zero en 2015, Bolsonaro afirmó que no cree justo que las mujeres y hombres reciban el mismo salario porque ellas se embarazan. Afirmó: *Entre um homem e uma mulher jovem, o que o empresário pensa? "Poxa, essa mulher tá com aliança no dedo, daqui a pouco engravida, seis meses de licença-maternidade..." Bonito pra c...! Quem que vai pagar a conta?"*

En abril de 2017, en un discurso en el Club Hebraico en Rio de Janeiro, Bolsonaro hizo mención a su hija de 6 años: *Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens, aí no quinto eu dei uma fraquejada e veio uma mulher.*

Las bromas revisten un discurso oculto que en verdad expresa a todas luces, la subalternización de las mujeres.



Reflexiones finales

Frente a una crítica a las formas no institucionalizadas de hacer política, puede visualizarse en la cabeza del Ejecutivo del Brasil de hoy un proyecto de Estado refundacional legitimado en un gran relato. Este relato confiere a la moralidad la centralidad del discurso público. Como nunca antes, se evocan referencias a la patria, a dios “por encima de todo”, y a la familia como célula básica de la sociedad.

Caracterizamos a este discurso como un discurso conservador, de raigambre clásica, que al mismo tiempo conjuga formas antiguas conocidas de represión y contención de un orden excluyente, y reviste en ropajes nuevos. En este escenario, la condena que les queda a aquellos que no son considerados parte de la patria, dios y la familia tradicional -por lo pronto no catalogados aún como anti-patrias-, merece un especial detenimiento.

En pleno siglo XXI el proyecto de nación brasileño prefigura remodelar una sociedad antes basada en el discurso de la multiculturalidad, la diversidad y el respeto a las diferentes etnias y razas. Esta prefiguración no puede realizarse sino a través de la construcción de una nueva hegemonía, que no prescinde de un alto grado de coerción.

Esta hegemonía se sustenta en la alianza entre hombres que a modo de “pacto de caballeros” o acuerdo de lealtad excluye y disciplina a las mujeres. El caso del asesinato de la vereadora de Rio de Janeiro, Marielle Franco es una evidencia de este pacto. Entendemos que no existiría un relato tan tácitamente aceptado y legitimado si no fuera por la existencia de un sistema patriarcal que, a la luz de la crítica al gobierno de Dilma Rousseff como suceso determinante, abrió la ventana de oportunidad para mostrar y exponer la condición de necesidad de un gobierno que asuma de vez la reestructuración del edificio estatal patriarcal.

Rita Segato se pregunta “¿Cómo etnografiar el poder, con su estrategia clásica de pacto de silencio sellado entre pares raramente falible en cualquiera de sus escenas - patriarcal, racial, imperial, metropolitana-? Sólo podemos conocerlo por la regularidad de algunos de sus efectos, que nos permiten orientarnos hacia el desciframiento de adónde se dirige su proyecto histórico” (Segato, 2015).

Notas

¹UNILA. victoria.darling@unila.edu.br



Referencias bibliográficas

- Castro, Celso (2014) *O espírito militar. Um antropólogo na caserna*, ZAHAR, Sao Paulo.
- Carta Capital (2019) “Damares justifica abuso de meninas...”, en Carta Capital, 25-07-2019. Disponible en: <<https://bit.ly/3pOuCEY>>. Acceso en: 4 de septiembre de 2019.
- Dias Carneiro, Julia (2019) “Governo Bolsonaro: conheça a academia que formou o presidente e seis integrantes do governo”, en BBC News, 2 de enero de 2019. Disponible en: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46655124> Acceso en: 20 de sept. 2019.
- Miskolci, Richard y Campana, Maximiliano (2017) “Ideologia de gênero”: notas para a genealogia de um pânico moral contemporâneo, *Revista Sociedade e Estado*, Vol. 32, Num. 3. Set/Dez.
- Moury, Taciana, “Academia militar del Ejército Brasileño recibe a primeras mujeres”, *Revista Diálogo*, 23 de marzo 2018.
- O Globo (2019) “Foi uma brincadeira de profundo mal gosto”, en G1 notícias. Disponible en: <<https://glo.bo/3baYNST>> Acceso en: 7 de septiembre de 2019.
- O’Leary, Dale (2004) El feminismo de género. Corrientes de pensamiento que impiden la promoción de la mujer, en *L’Osservatore Romano*, nº 47, el 19 de noviembre.
- Portinari, Natália (2019) “Oposição cobra que MPF investigue Damares Alves por adoção de criança indígena”, en O Globo, 01-02-2019. Acceso en: 4 de septiembre de 2019.
- Robaina, Roberto (2018) “Pacto das elites na história política dos últimos 35 anos do Brasil”m 28 de janeiro, *Movimento*. Disponible en: <<https://bit.ly/3neYGrx>>. Acceso en: 21 de septiembre de 2019.
- Segato, Rita (2016) *La guerra contra las mujeres*, Traficantes de Sueños,
- Tereza Cristina MS (2019) Site personal e profesional.<<https://bit.ly/2Xd91Ka>>. Acceso en: 08 de septiembre de 2019.
- Valorsoja (2018) “Quién es Tereza Cristina..”, Actualidad en Revista ValorSoja. 10 de noviembre de 2018. Disponible en: Valorsoja.com. Disponible en: Acceso en: 4 de septiembre de 2019.



O que vem depois da negação?

Construções autônomas de movimentos sociais em suas relações com o Estado desde experiências mexicanas.

Gustavo Oliveira¹

Monika Dowbor²

Resumo

Mais do que descrever um movimento, e muitas vezes em termos normativos e em contraposição ao seu binômio mais frequente, a cooptação, ou servir para fazer registro dos sentidos nativos, a autonomia como categoria de análise pode ajudar a responder a seguinte pergunta: o que os movimentos sociais críticos ao Estado criam em termos de modos de vida, organizações, instituições e políticas? A partir da mirada processual e relacional, o objetivo deste paper consiste em apresentar um esquema analítico para o uso da categoria de autonomia. Sua elaboração se deu com base na revisão sistemática da literatura e, em seguida, procedeu-se à aplicação em três casos mexicanos, o que trouxe novos ganhos analíticos. Defendemos que a análise da autonomia passa pela observação do processo da negação e construção. Esse duplo olhar – o que é rejeitado no Estado, no seu modos operandi, nas suas instituições e naquilo que ele produz e o que o movimento constrói no lugar – nos leva a três possibilidades analíticas: negação do Estado em si leva à construção de práticas sociais e políticas próprias; a rejeição das formas de funcionamento do Estado e suas instituições leva a formas alternativas de organização e ação com foco no confronto político extrainstitucional; e, por fim, a negação daquilo que o Estado produz em termos de políticas públicas leva a construções institucionais por meio dos quais se busca a produção da política e das políticas públicas permeadas pela visão de mundo do movimento.

Palavras chave

Movimentos sociais; Autonomia; Estado.

Introdução

No México, pelo menos desde a década de 1990, a categoria autonomia ganhou mais força política e representação do que nunca a partir do levante do Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), em 1994. Naturalmente, esse acontecimento histórico e de importante relevância no contexto latino-americano e mundial dos movimentos sociais antisistêmicos (Holloway, 2011; Wallerstein, 2008) engendrou grande interesse dos



pesquisadores e analistas estudiosos do tema. Em sua grande maioria com a intenção de descrever o processo de tipo revolucionário-emancipatório que acontecia nas montanhas de Chiapas, muito se produziu sobre tal experiência. O levantamento tratava-se, em um primeiro momento, de uma tentativa de reconhecimento das diferenças pré e pós-colombianas no qual o movimento demandava seu direito à livre determinação e autogoverno por usos e costumes junto ao governo de Chiapas e ao governo federal mexicano. Tratava-se, para além de tal objetivo claro e concreto, de uma inspiração para uma enormidade de outros processos de busca pela autonomia dos povos originários ao redor do país. A autonomia enquanto discurso político, principalmente, mas também enquanto organização e ação foi o grande fato novo da política mexicana dos últimos anos do século XX. No entanto, esse movimento de libertação política protagonizado por parte dos povos originários do sudeste mexicano não alcançou toda a região continental e sequer todo o território nacional mexicano.

No Brasil³, por sua vez, a redemocratização (1985-1988) e as reformas do Estado, tanto na chave neoliberal quanto na do projeto democrático-participativo, ampliaram o leque de formas de interação dos movimentos sociais com o Estado e fizeram com que a autonomia enquanto termo nativo e categoria analítica perdesse a centralidade que tinha outrora (Avritzer, 2012; Lavalle; Szwako, 2015). Depois de ser substituída por categorias de caráter relacional como interdependência (Avritzer, 2012), repertório de interação (Abers; Serafim; Tatagiba, 2014), formas de conexão (Bringel; Falero, 2016) ou coalizões de defesa (Barcelos; Pereira; Silva, 2017), o termo tem voltado à cena, seja nas ruas, seja no debate acadêmico. As recentes ondas de mobilizações trouxeram a autonomia vocalizada pelos movimentos sociais enquanto princípio norteador de suas organizações e ações. As relações com o Estado por meio de canais institucionalizados como o orçamento participativo e os conselhos gestores de políticas públicas, no Brasil, e os processos de reconhecimento dos povos originários para autogovernarem-se por usos e costumes, no México, levantam dúvidas sobre os efeitos das relações entre movimentos sociais e Estados em processos em que os próprios movimentos se reconhecem e se reclamam como autônomos ao mesmo tempo em que interagem com seus respectivos Estados.

Para pensar sobre o papel e o compromisso do analista que se dedica aos estudos daqueles processos de autonomia de movimentos sociais, ainda recorrendo ao contexto brasileiro, identificamos que o mais recente debate sobre a autonomia no meio acadêmico de ciências sociais foi travado por Adrian Lavalle e José Szwako (2015), em



seu texto “Sociedade civil, Estado e autonomia: argumentos, contra-argumentos e avanços no debate” em diálogo com o artigo de Leonardo Avritzer (2012), intitulado “Sociedade civil e Estado no Brasil: da autonomia à interdependência política”. No trabalho da dupla, eles chamam a atenção para o perigo do emprego analítico de autonomia nos termos atribuídos pelos atores empíricos como válido para descrever de forma ampla e sem necessárias mediações as relações entre os atores da sociedade civil e do Estado. Ao mesmo tempo, apontam para a importância do resgate e sistematização de seus usos nativos para a construção analítica profícua e robusta do conceito. Esses argumentos nos levam a pensar na autonomia como um daqueles termos “malditos” ao lado da autogestão, cooperação ou participação, entre outros, que são usados como instrumentos discursivos e políticos pelos atores engajados em disputas políticas e processos de afirmação identitária, tornando-se polissêmicos e altamente normativos, escapando ao enquadramento conceitual mínimo necessário para as análises. No plano teórico, Lavalle e Szwako (2015, p. 175) falam desse desafio da seguinte maneira:

[...] a autonomia pode desempenhar diferentes funções nos arcabouços analíticos em questão, bem como ser valorizada por diversos motivos. Assim, a autonomia qua categoria de análise não é unívoca e sequer autoevidente; seu uso admite uma ampla gama de filiações analíticas e, seguindo o cânone epistemológico de explicitação da posição da fala, cabe aos autores ser claros quanto a seus pressupostos teórico-normativos.

O seu veredito sobre o potencial teórico-analítico de autonomia indica para a diversidade de filiações sem que nenhuma delas seja apontada pelos autores como especialmente propícia para o estudo de movimentos sociais no Brasil. O caminho empírico lhes parecia mais promissor e profícuo no sentido do resgate, sistematização e tipificação dos sentidos nativos do termo. Numa espécie de proposta de *grounded theory*, os autores afirmam que

[...] a compreensão analítica da autonomia passa pela compreensão da representação nativa feita pelos atores a respeito das suas trocas, dívidas e dessimetrias com outros atores políticos e também civis (Lavalle; Szwako, 2015, p. 177).

Não se trata, no entanto, de uma tarefa fácil, avisam os autores ao frisar:

A compreensão dos sentidos da ‘autonomia’, todavia, é tarefa árdua que demanda o exame das situações em que ela é invocada por diferentes atores, de modo a desvendar os sentidos atualizados por tal invocação perante diferentes interlocutores. Seus



sentidos, por conseguinte, não podem ser derivados da teoria, nem imputados em macronarrativas de modo homogêneo à sociedade civil como um todo (Lavalle; Szwako, 2015, p. 170).

Em recente estudo (Oliveira; Dowbor, 2018) tentamos realizar, ainda que de forma parcial, a tarefa sugerida por Lavalle e Szwako (2015) sobre a necessidade de sistematização das versões empíricas da autonomia para movimentos sociais de distintos tempos, espaços e contextos. Já no texto deste artigo, em tela, que se trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa produzida a partir de revisão bibliográfica e de entrevistas semiestruturadas realizadas nos últimos meses de 2018, nosso objetivo foi compreender como se expressam as ações autônomas de movimentos sociais em suas interações com o Estado desde três casos singulares todos localizados no México, buscando entender também como o Estado se posicionou e se comportou nos diferentes casos. Para cumprir tal tarefa avançamos por sobre as reflexões daquele recente trabalho, supracitado, e formulamos uma possibilidade analítica para a categoria autonomia, o que nos possibilitou analisar cada caso aqui exposto com maior precisão. Dando sequência ao texto, além desta seção introdutória e das reflexões finais, apresentamos uma seção de descrição do que entendemos por autonomia e uma seção com dados sobre os casos do EZLN (Chiapas), do Movimiento Social Oxchuc (município de Oxchuc, Chiapas) e da Frente Defensa y Protección del Patrimonio de San Andrés Totoltepec (comunidade de San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan, Cidade do México).

Quê autonomia?

Nos interessa, antes de explicitar nossas reflexões e formulações sobre autonomia, deixar claro alguns pressupostos nossos. Esses pressupostos não são exatamente de partida, pois se conformaram ao longo do diálogo com trabalhos anteriores e neste, mas não são tampouco uma descoberta *a posteriori* na medida em que neles reconhecemos argumentos e abordagens acionados ao longo dos anos dedicados aos estudos de movimentos sociais. Primeiro, é necessário assinalar que é possível pensar na autonomia de movimentos sociais em relação a diferentes esferas – ao Estado, à dominação colonial (Böhm; Dinerstein; Spicer, 2010), ao capital (Holloway, 2011), à dominação patriarcal (Castoriadis, 1997), etc. Aqui nos concentramos nas formas de autodefinição de discursos e repertórios e na auto-organização e na ação dos movimentos em relação ao Estado.



Em segundo lugar, entendemos que não podemos pensar a categoria autonomia como uma categoria que dê conta de explicar o que é um determinado movimento social. Os movimentos são fluidos e, em muitas situações, imprevisíveis por serem atravessados pelas mais diversas dinâmicas sociais. Nas palavras de uma estudiosa brasileira de movimentos de longa data: “Nunca haverá uma teoria completamente pronta e acabada sobre eles. Trata-se de uma característica do próprio objeto de estudos.” (Gohn, 1997, p. 343). Ou seja, não estamos nos propondo a pensar na autonomia como uma chave explicativa totalizante dos movimentos sociais que seriam, neste caso, antes de tudo autônomos. Consideramos importante frisar isso mediante os argumentos frequentemente evocados que apontam o fim dessa forma de ação coletiva quando esta deixa de ser autônoma ou, em outros termos, quando ela é cooptada por um outro ator – no nosso caso o Estado. Por isso pensamos na autonomia como um marco da ação dos movimentos, seja ela voltada ao Estado na melhor expressão do repertório de ação e/ou interação (Abers; Serafim; Tatagiba, 2014), seja ela entendida como expressão da forma organizacional (Clemens, 1993) ou ainda no desenvolvimento de práticas cotidianas (Baschet, 2017; Brancaloneo, 2012; Mora, 2018). Trata-se, portanto, de pensar a autonomia localizada em um determinado espaço-tempo (Holloway, 2011).

Em terceiro lugar, entendemos a autonomia como termo propriamente relacional: um movimento só pode se declarar autônomo na medida em que existe uma relação com outrem. Isto é, ele se autodefine e se auto-organiza em relação a alguma instituição ou ator que poderia, em tese, impor-lhe um modo de funcionamento. O desdobramento desse enfoque relacional nos leva a uma consequência analítica importante. A autodeclaração da autonomia significa que o outro em relação ao qual o movimento se definiu como autônomo é fruto de uma construção cognitiva: ele é caracterizado e delineado a partir de suas experiências, compreensões, visões do mundo. Seu *modus operandi* e suas fronteiras de interferência são nomeadas pelo movimento a fim de poder diferenciar, distinguir e definir seu próprio *modus operandi* e as fronteiras para sua autonomia. Se o movimento diz que ele é autônomo na medida em que recusa a adotar as formas de organização reconhecidas pelo Estado, como a escolha de representantes, por exemplo, ele reconhece o Estado como instituição capaz de dialogar apenas com representantes e lideranças. Mas o Estado construído cognitivamente pelo movimento é apenas um faceta do Estado. A construção cognitiva é uma seleção de traços e características que deixa de lado ou simplesmente não enxerga outros elementos e dinâmicas.



O exposto acima nos leva para um quarto pressuposto: o de mútua constituição entre movimentos e Estado (Skocpol, 1992). O Estado por meio de sua ação também é consubstanciado através de instituições entendidas de forma ampla como normas, regras, políticas públicas entre outros que constituem uma trama fina e invisível que afeta e molda a ação dos indivíduos e atores coletivos na medida em que estão imersos nela no cotidiano. A mútua constituição implica portanto que, como pesquisadores, reconhecamos o contexto em que estão inseridos os atores no sentido histórico e que este contexto institucional afeta a ação dos movimentos. Aqui incluímos toda uma esfera não contida na definição cognitiva do Estado em relação ao qual o movimento se define como autônomo.

Um quinto pressuposto é o que indica cuidado ao acionarmos a categoria autonomia porque ela pode ser facilmente confundida com a ideia de uma autonomia individual puramente liberal (Baschet, 2017; Collin, 2012). Ou seja, a abordagem de que um sujeito só é autônomo quando alcança sua autossuficiência econômico-financeira. O problema é que quando acionada desta forma ela pressupõe que as relações sociais podem se dar sem a necessidade de uma certa trama de todas as dimensões da vida humana, na qual a dimensão econômica estaria separada e sobreposta as demais – dimensões social, cultural e política. Polanyi (2000) é certo ao desmistificar esse argumento mostrando que se trata de uma ficção a ideia de que a economia está isolada das demais dimensões da vida humana.

Um sexto e último pressuposto tem que ver especificamente com os casos que apresentamos neste texto que são tendências dada a diversidade de movimentos que se reclamam autônomos, sendo distintos entre si em suas práticas mas que apresentam uma semelhança essencial em relação as suas origens: são povos originários mexicanos. Os movimentos indígenas da América Latina, povos originários que são, não se consideraram sempre autônomos ao largo da história. Tampouco a categoria autonomia fazia sentido e parte de suas possibilidades de ação e linguagem. Foram os novos costumes, linguagens e conhecimentos introduzidos com a perversa prática colonizadora que, como consequência, obrigaram esses movimentos a reivindicarem-se como autônomos para que pudessem continuar vivendo de acordo com suas visões de mundo e práticas originais. Nos três casos que apresentaremos ao longo do texto, os povos originários passaram a lutar pela manutenção de suas formas de pensar e de agir, cada qual com suas singularidades, na medida em que o Estado praticava mais ou



menos constrangimentos e coerções a seus modos de vida e violência como resposta a suas formas de resistência.

Voltemos, agora, ao problema da polissemia da categoria autonomia e da necessidade de uma revisão dedicada sobre os usos do termo desde os próprios atores sociais. Realizamos recentemente um estudo (Oliveira; Dowbor, 2018) com base nos casos empíricos analisados por terceiros no qual distinguimos três diferentes formas de autonomia desde as reivindicações dos próprios movimentos sociais em relação ao Estado. São elas:

- (i) *autonomia das práticas cotidianas na recusa da relação com o Estado,*
- (ii) *autonomia tática e organizacional no confronto político extrainstitucional com o Estado*
e
- (iii) *autonomia como autodeterminação de formas organizacionais e de ação nas interações com o Estado (Oliveira; Dowbor, 2018, p. 4).*

No primeiro caso, a autonomia se manifesta na “luta do movimento social para a transformação do *status quo* [...] a partir da criação de vivências que traduzem a visão do mundo do movimento e nas quais não se busca e/ou se rejeita a interferência do Estado e de suas instituições” (Oliveira; Dowbor, 2018, p. 6)

– aqui a vinculação com a abordagem de movimentos sociais de Alain Touraine e outros; no segundo, a autonomia aparece como confronto político extrainstitucional e o “Estado é alvo de reivindicações, dele se exige a produção de políticas voltadas às demandas do movimento, almejando reconhecimento e pressionando para que seus objetivos se tornem ações e políticas do Estado.” (Idem, p. 10) – neste caso a vinculação se dá com a teoria do processo político de Charles Tilly e outros; e, no terceiro, a “autonomia consiste na preservação do poder de decisão do movimento sobre suas formas de ação e organização apesar da inserção de segmentos do movimento nas instituições do Estado.” (Idem, p. 13) – que se vincula a abordagem, em grande medida brasileira, de movimentos que dá destaque a mútua constituição Estado-movimentos sociais.

Inspirados nestes nossos esforços anteriores, identificamos um núcleo comum de atributos quando a categoria autonomia é vocalizada pelos atores empíricos. Encontrar um núcleo comum em uma categoria majoritariamente empírica e político-discursiva, além de difusa e polissêmica, nos surpreende em alguma medida. Nos surpreende, por um lado, porque os três tipos de autonomia que encontramos apresentam diferenças substantivas entre si e, por outro, porque nos anima a pensar as possibilidades de



construção de um conceito de característica teórico-explicativa a partir deste núcleo comum de atributos e também das diferenças encontradas. São dois, pelo menos, os atributos que podemos encontrar nos diferentes tipos de autonomia de movimentos sociais: a negação e a construção. Autonomia que nega, em alguma medida, a relação com o outro e que constrói algo novo a partir desta negação. Cena 1: o reconhecimento seguido pela negação do outro; Cena 2: a construção de uma alternativa que defina a ação do movimento social como diferente daquele que negou.

Pensar desde essa perspectiva da negação seguida de construção não é exatamente uma novidade conceitual. Ainda que os textos que revisamos no trabalho supracitado não sistematizem esse duplo processo prático e analítico, autores como John Holloway (2011 p. 310) já identificaram que “la esencia de las autonomías es la negación y un hacer alternativo.”. Para este autor, a autonomia é um conceito positivo que só pode ser entendido se analisado conjuntamente com um conceito negativo que é anterior a ela, o conceito de *grietas* (em português “rachaduras”). As *grietas* são o grito, a negação de algum outro – no caso das análises do autor o sistema do capital. Depois do grito que nega através de *grietas*, a autonomia que constrói. Neste mesmo sentido poderíamos ainda buscar inspiração em Enrique Dussel (2014), no seu argumento de que a *crítica negativa* só faz sentido no contexto das lutas emancipatórias se estiver acompanhada de uma *crítica positiva*.

Seja a partir da revisão de nosso esforço anterior (Oliveira; Dowbor, 2018) e das contribuições conceituais de Holloway (2011) e Dussel (2014), seja mirando para os casos que descreveremos adiante, entendemos que a ação dos movimentos sociais se expressa com características comuns, a negação e a construção. Perguntamos, então: Como um movimento social mobiliza sua ação? Quais mecanismos (psíquicos ou concretos) produzem essa ação de negação, primeiro, e de construção, depois? Para tentar responder estas duas perguntas, buscamos inspiração conceitual no grupo de estudos que ficou conhecido como Socialismo ou Barbárie e, especificamente, em Cornelius Castoriadis (1997). Para este autor, que trata a autonomia individual e a coletiva como duas faces de uma mesma moeda, autonomia é a capacidade reflexiva e a lucidez para a tomada de decisão sobre os rumos da vida individual e coletiva; essa tomada de decisão precisa se dar em um contexto de uma subjetividade livre de opressões (autonomia individual) e com mecanismos sociais (ou métodos) que garantam a igualdade na ação decisória (autonomia coletiva).



¿Puedo decir que pongo mi ley -ya que vivo necesariamente bajo la ley de la sociedad-? Sí, sólo en un caso: si puedo decir, reflexiva y lúcidamente que esta ley es también la mía. Para que pueda decir esto no es necesario que la apruebe: basta con que haya tenido la posibilidad efectiva de participar activamente en la formación y el funcionamiento de la ley.²⁸ La posibilidad de participar: si acepto la idea de autonomía como tal (no sólo porque resulte "buena para mí"), es porque evidentemente ninguna "demostración" puede obligar a poner en consonancia mis palabras y mis actos, la pluralidad indefinida de individuos pertenece a la sociedad conduciendo incluso a la democracia como posibilidad efectiva de participación igualitaria de todos en las actividades instituyentes del poder explícito [...] (Castoriadis, 1997, p. 13).

O autor mostra que a autonomia tem mais que ver com a possibilidade de participação nas tomadas de decisão que tocam à vida, seja em questões cotidianas, seja em questões mais amplas, e menos com a ideia de independência ou separação. Essa possibilidade de tomada de decisão em nível de igualdade precisa estar combinada com capacidade de reflexão e a lucidez dos sujeitos, que tornam-se autônomos não por decidirem os rumos de suas vidas de forma totalmente isolada, sem interferências de outros sujeitos, mas por encontrarem mecanismos que os permitam participar de igual para igual de todas as tomadas de decisões coletivas que tocam suas vidas em sentido público e privado.

Se aceitamos que a autonomia de movimentos sociais, desde suas diferentes experiências empíricas, tem como núcleo comum a negação ao outro, no nosso caso a negação do Estado, seguida da construção de algo novo, de algo diferente do que já está dado, avançamos um pouco do que formulou Castoriadis (1997). Para o autor, como vimos, autonomia é a capacidade de reflexão e lucidez somadas a igualdade de participação nas tomadas de decisão sobre a vida individual e coletiva. No nosso caso, especificamente, é a capacidade de reflexão e lucidez dos movimentos sociais somadas a igualdade de participação nas tomadas de decisão sobre a vida individual e coletiva na relação daqueles movimentos com o Estado. Castoriadis (1997) diz, no entanto, que autonomia não significa, necessariamente, que o que eu quero seja o resultado da tomada de decisão, bastaria que eu tenha tido capacidade de reflexão e lucidez e igualdade de participação naquela decisão que é fruto de um processo de coletivo de deliberação sobre um determinado tema.



Se dizemos que autonomia é a negação seguida da construção, é porque a autonomia configura também o passo seguinte depois de diagnosticado por um determinado movimento social que não há – ou não houve – possibilidade de tomada de decisão em nível de igualdade – processo esse que é central nos argumentos de Castoriadis (1997); e, nesse passo seguinte, se constroem alternativas para além do que foi decidido de maneira desigual. Da negação que é seguida pela construção temos, em uma aparente contradição, o reconhecimento da diferença e a tentativa de superação dela. Para negar o diferente é preciso reconhecê-lo enquanto tal para depois construir algo novo para superar essa diferença. Castoriadis (1997) nos ajuda de forma significativa desde uma perspectiva filosófica ou psíquica-cognitiva em nossa formulação porque para reconhecer o outro e negá-lo, em função da impossibilidade de tomada de decisão em nível de igualdade, é preciso de capacidade reflexiva e de lucidez, por um lado; e desde uma perspectiva concreta, porque precisamos perceber mecanismos (subjetivos ou metodológicos), em contexto institucional ou não, que nos garanta a possibilidade de negação e de construção de uma nova alternativa, por outro lado. Entendemos que escapamos da normatividade da formulação conceitual de Castoriadis (1997). Normatividade esta que se expressa no idealismo que o autor entrega para a ideia de uma *outra sociedade possível* onde encontraríamos, *a priori*, capacidade de reflexão e lucidez de todos os sujeitos (individuais e coletivos) somadas a garantia de igualmente de participação nas tomadas de decisão sobre a vida individual e coletiva. Para nós, o realismo da vida concreta faz surgir a autonomia como negação e construção, ou seja, quando os sujeitos não encontram aquele outro mundo eles negam o mundo atual e, a partir desta negação, constroem novas alternativas sustentadas pelas diferenças deste e daquele mundo. Esse realismo que, de fundo, expressa as contradições dos Estados modernos e das democracias representativas, além das contradições e desigualdades históricas produzidas e reproduzidas pelo capitalismo nos termos de Marx, nos leva a pensar em uma ideia de uma dialética da autonomia. Em um processo sem fim a autonomia poderia ser uma forma analítica de entender os contextos de tese, antítese e síntese das relações entre movimentos sociais e Estados.

Considerando, então, (i) a capacidade de reflexão e lucidez dos movimentos, (ii) a negação e a construção como um duplo processo relacional e (iii) as diferenças de cada tipo de autonomia anteriormente sistematizadas por nós (Oliveira; Dowbor, 2018), podemos dizer, sinteticamente, que no primeiro caso os movimentos negam e rejeitam o Estado em sua totalidade e, por isto, constroem outros modos de vida a partir de suas diferenças essenciais e de visão de mundo em relação ao Estado – como veremos,



como na experiência do EZLN. No segundo caso os movimentos negam a forma de funcionamento hierárquico e de poder do Estado e, por isto, constroem formas de confronto político extrainstitucional que alcançam mais ou menos pressão, reconhecimento e inclusão de pautas na agenda estatal – como veremos, como na experiência do Movimiento Social Oxchuc. E, finalmente, no terceiro caso os movimentos negam a desigualdade histórica nas tomadas de decisão do Estado, que afastam aquelas decisões da visão de mundo do movimento e, por isto, constroem quadros de ativistas institucionais que passam a disputar as tomadas de decisão com o Estado, por um lado, e que intentam a criação de novas lógicas institucionais, por outro – como veremos, como na experiência da Frente Defensa y Protección del Patrimonio de San Andrés Totoltepec.

Ação autônoma e comportamento estatal: Os casos do EZLN, de Oxchuc-Chiapas e de San Andrés Totoltepec-CDMX

Desde a perspectiva jurídica é importante assinalar que a constituição mexicana prevê, desde 1917, no seu artigo 2º, a possibilidade de os povos originários serem reconhecidos por usos e costumes e, a partir disso, de exercerem seu direito à livre determinação e o autogoverno de suas comunidades. Ou seja, legalmente as comunidades reconhecidas como originárias poderiam, a qualquer momento, reivindicar aquele direito à livre determinação e autogoverno a partir desta garantia legal no nível mais alto da federação desde 1917. Esse direito é chamado pelos próprios povos originários de direito à autonomia política. Destacado isto, a seguir descreveremos os três casos estudados apontando acontecimentos que nos parecem importantes em cada caso, assim como as particularidades de cada um, ao mesmo tempo em que refletiremos sobre as possibilidades de aproximação dos casos com as formulações de caráter explicativo que vimos trabalhando em discussões anteriores e nesta.

Chiapas, 1º de janeiro de 1994: o mundo inteiro ficou conhecendo, a partir deste dia, o Ejército Zapatista de Liberación Nacional - EZLN. Com origens no movimento Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), um grupo armado de ideário marxista-leninista formado por militantes do norte do México, especificamente da cidade de Monterrey, o levante de parte dos povos originários do sudeste mexicano negava explicitamente a entrada do México no Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) e, além disso, a opressão histórica sofrida pelos povos originários do país – o alvo de ambas as negações era o Estado mexicano e o sistema político vigente no país. Como construção àquelas negações, o EZLN começou tornando públicas as leis revolucionárias que



definiam uma nova forma de vida, portanto, outra visão de mundo e outras sociabilidades para cada “território liberado” a partir do levante do movimento.

Sete foram os municípios liberados inicialmente, todos em Chiapas, onde de imediato o EZLN iniciou esforços de criação de “novas fronteiras socioespaciais e de governos civis autônomos paralelos aos governos dos municípios oficiais” (BRANCALEONE, 2012, p. 257). O objetivo inicial era seguir em marcha em direção à Ciudad de México liberando outros territórios por onde passassem. O Estado reagiu de forma violenta e foram 12 dias de intensos confrontos. Foram vários os diálogos frustrados e os confrontos violentos. Pelo menos, se pode assinalar uma primeira tentativa de diálogo em março de 1994, uma ofensiva violenta por parte do Estado em fevereiro de 1995 e outra tentativa de diálogo, esta conhecida como os Acuerdos de San Andrés, que se desenrolou de outubro de 1995 à janeiro de 1996. Anos depois, já não esperando qualquer tipo de comprometimento do Estado mexicano, o EZLN tornou público, em 2003, sua decisão de levar adiante sua demanda por livre determinação e autogoverno de forma unilateral em relação ao Estado. Se o Estado oferecia falsos acordos e violência, o EZLN construía, agora rejeitando a relação com o Estado em sua totalidade, suas comunidades autônomas: nasciam os Caracóis Zapatistas.

Na constituição do estado de Chiapas a especificação da livre determinação e autogoverno aparece em uma emenda de 2012 (capítulo IV). Ou seja, quando da insurgência do EZLN (1994) e mesmo depois, quando decidiram rejeitar totalmente o Estado (2003, fundação dos Caracóis), eles tinham garantia apenas da constituição mexicana. Além do que já garantia a constituição mexicana, quando do primeiro diálogo do EZLN com o Estado (março de 1994), de acordo com Brancaloneo (2012, p. 260), “o governo parecia simpático às demandas dos insurretos, mas acabou saindo pela tangente com uma proposta de modificação constitucional extremamente genérica sobre o pleno direito de manifestação cultural das populações indígenas.”. Depois, quando dos Acuerdos de San Andrés (1995-1996), Brancaloneo (2012, p. 262) assinala que os compromissos firmados foram:

o reconhecimento, como garantia constitucional, do direito de autodeterminação dos povos indígenas (especialmente levando em conta o fato do México ser signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho); a realização de reformas legais e constitucionais visando ampliar a participação e a representação política local e nacional dos povos indígenas, conformando um novo federalismo; a garantia do acesso pleno dos povos indígenas aos instrumentos jurídicos do Estado, e sua adaptação às suas especificidades culturais e seus sistemas normativos internos.



No entanto,

o problema foi que, no ano seguinte, o governo Zedillo elaborou uma proposta unilateral, desconsiderando abertamente os acordos presentes nos documentos finais dos diálogos. Mais uma vez, outra modificação constitucional genérica seria encaminhada ao Congresso, perdendo-se no discurso amplo 'da necessidade de se preservar e defender o patrimônio cultural indígena' (Idem, p. 262).

É importante destacar que a constituição mexicana garante o direito à livre determinação e autogoverno para as comunidades originárias desde que elas sejam reconhecidas enquanto tal. O texto da constituição é vago quando fala de tal reconhecimento:

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Havia garantia legal em última instância na constituição mexicana para que o EZLN alcançasse seu direito ao autogoverno e à livre determinação. No entanto, por um lado o texto da constituição federal não era regulamentar e, por outro, a constituição de Chiapas ainda não detalhava a questão daquele reconhecimento desde o âmbito estadual nem em 1994 e nem em 2003. Isso não impediria, no entanto, que o Estado garantisse via decreto ou poder judiciário federal o reconhecimento baseado no texto de 1917 da constituição do país. Ou seja, não houve vontade política em reconhecer a demanda de livre determinação e autogoverno dos Zapatistas.

Chiapas, 08 de janeiro de 2016: parte da comunidade do município de Oxchuc protagonizou violento confronto político com as autoridades locais. O confronto foi resultado da demanda do Movimento Social Oxchuc (MSO) que era a negação do sistema partidário em nível municipal. Organizados no MSO, que criou a Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc (CPPJIO) em outubro de 2015, aquela negação se expressou, naquele 08 de janeiro, na tentativa de impedimento da posse de María Gloria Sánchez Gómez, do Partido Verde Ecologista do México (PVEM), eleita de forma supostamente antidemocrática como presidenta do município em 19 de julho de 2015. Ainda em 2015 a CPPJIO, que foi a construção resultado da negação do MSO ao sistema partidário no nível municipal, tinha como objetivo inicial dialogar com o Estado (poder judiciário estadual) para alcançar o reconhecimento de Oxchuc como povo originário – reconhecimento de usos e costumes –, a fim de lançar mão ao direito à livre



determinação e o autogoverno. No entanto, aparentemente, não havia disposição do Estado em dialogar.

Depois da forte repressão sofrida no 08 de janeiro, os objetivos do MSO e da CPPJIO – alcançar a livre determinação e o autogoverno sem negar a relação com o Estado – parecia ter sido alcançado já que em 15 de fevereiro o governo do estado de Chiapas determinou o afastamento de María Gloria e aceitou a reivindicação da comunidade de eleger um novo presidente municipal por assembleia geral e sem a participação de partidos. No entanto, em 31 de agosto de 2016 o Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolveu o direito de governar à María Gloria, o que fez com que o MSO partisse para o confronto político extrainstitucional. De acordo com Eduardo Rodríguez⁴ (informação verbal), para alcançar o reconhecimento de usos e costumes uma série de táticas foram forjadas e postas em prática pelo movimento: marchas que terminavam na sede do governo municipal denunciando a corrupção do sistema partidário e a distância desse sistema da realidade de práticas ancestrais da comunidade; fogueiras simultâneas em diferentes bairros do município; uma marcha de mais de 100km de Oxchuc à Tuxtla Gutierrez (capital de Chiapas); bloqueios à caminhões de grandes empresas e à excursões de turistas na principal rodovia que passa pelo município; e a criação de uma polícia comunitária. Se o Estado não estava disposto ao diálogo, o MSO encontrou no confronto político extrainstitucional sua estratégia de ação.

Assim como a experiência do EZLN, Oxchuc também está localizado em Chiapas e isso nos leva a algumas similaridades nos dois casos considerando a forma com que o Estado se posicionou. A diferença essencial é que tudo aconteceu em Oxchuc a partir de 2015 quando a constituição de Chiapas já apresentava um dispositivo sobre o reconhecimento dos povos originários. A questão não estava resolvida, no entanto, porque assim como a constituição mexicana, a do estado de Chiapas também é pouco clara em relação ao direito dos povos originários à livre determinação e ao autogoverno. Desde 2012 o texto fala no reconhecimento do direito à livre determinação e ao autogoverno, mas não prevê formas, métodos e regras de como devem ser reconhecidos. A caracterização do posicionamento do Estado é idêntico ao caso do EZLN – até porque houve diálogo e muito confronto nos dois casos. A diferença é que em Oxchuc não há disposição da comunidade em rejeitar totalmente o Estado; portanto, ao invés de negar o Estado em sua totalidade, como no caso do EZLN, a comunidade seguiu tensionando o Estado em busca do reconhecimento do Estado através do



confronto político extrainstitucional e de diálogos quando houve disposição do Estado para tal prática.

Cidade do México, 02 de setembro de 2018: toma posse o primeiro mandato do Consejo Comunitario de Autogobierno do pueblo de San Andrés Totoltepec - Tlalpan. O conselho, fruto de anos de organização e mobilização comunitária a partir da Frente Defensa y Protección del Patrimonio de San Andrés Totoltepec e da boa análise e aproveitamento da conjuntura de consolidação da Constitución Política de la Ciudad de México, de 2017, é a expressão da negação da comunidade de Totoltepec à representação individual via sistema partidário em nível local. Como construção àquela negação e já com o afastamento do coordenador territorial, a comunidade elegeu o conselho como representação coletiva de autogoverno junto às instâncias superiores do Estado mexicano. Essa possibilidade de substituição da representação tradicional, que é individual e via partidos, por um conselho de autogoverno foi possível a partir do reconhecimento, por parte do Estado, de que a comunidade de Totoltepec se trata de um povo originário; o sistema de representação individual partidário deu lugar ao sistema de usos e costumes.

Mesmo com a instauração e início dos trabalhos do conselho em 02 de setembro, somente em 29 de novembro houve o reconhecimento jurídico definitivo

– importa assinalar que mesmo com esse reconhecimento o conselho vem sofrendo recorrentes boicotes da Alcaldía Tlalpan, que explicitamente não aceitou a decisão judicial e segue buscando recolocar seu coordenador territorial na estrutura de governo da comunidade. Ainda se trata de um reconhecimento via poder judiciário porque, mesmo com a nova constituição da Ciudad de México, a lei secundária, que é a lei que regulamentará o processo de reconhecimento dos povos originários e que, da mesma forma, regulamentará os processos de adesão dos povos originários ao sistema de livre determinação e autogoverno por usos e costumes, ainda não foi à votação no congresso da Ciudad de México.

De acordo com três conselheiros (informação verbal), o conselho conta com 14 conselheiros que estão distribuídos em 12 comissões de trabalho. As comissões compartilham das mesmas funções e apresentam distintos objetivos considerando cada realidade setorial. As comissões são: (1) cemitérios, (2) reordenamento de mobilidade, (3) acordos comunitários, (4) festas públicas, (5) serviços urbanos, (6) segurança e prevenção de delitos, (7) educação formal e cyber espaços, (8) esportes e cultura, (9) comércios, (10) desenvolvimento social, (11) tesouraria e administração e (12) território



e ecologia sustentável. Os limites explícitos da autonomia do conselho se dão em relação à organização econômica da comunidade, já que o sistema tributário segue sendo manejado pelo Estado que repassa um orçamento específico para as ações do conselho, e em relação aos serviços básicos oferecidos pelo Estado como educação, saúde e segurança – em relação à esses serviços a autonomia só se expressaria quando da negação da comunidade a alguma diretriz determinada pelas instâncias superiores do Estado. Aproveitando a abertura do Estado, a comunidade de Totoltepec optou pela construção de um governo local autônomo por dentro das estruturas estatais; uma fração alternativa ao Estado dentro do próprio Estado. Neste caso de Totoltepec havia uma dupla garantia: a da constituição mexicana e também a da constituição da Ciudad de México (artigos 57 e 59) – ainda que, como assinalamos, o texto da lei secundária ainda não foi concluído e votado no congresso. A comunidade entrou com o pedido de substituição da autoridade formal (coordenador territorial), que era sempre algum representante de partidos políticos indicado pelo partido que estava governando a Alcaldía, pelo direito à livre determinação e autogoverno por usos e costume e obteve sucesso na demanda.

Reflexões Finais

Finalmente, perguntamos: o que os três casos apresentados têm em comum entre si? Em nossa análise, os três convergem no que toca seus processos de negação seguida de construção que, como já vimos refletindo em outros esforços e agora neste, são características centrais da autonomia de movimentos sociais desde as experiências dos próprios ativistas. Depois de, naqueles esforços anteriores, sistematizarmos as variações dos diferentes tipos de autonomia dentro de um conjunto extenso de experiências, e de propormos uma formulação explicativa para analisar aqueles distintos processos, constatamos que o duplo processo relacional de movimentos sociais em relação ao Estado – negação e construção –, está presente nos três casos em tela. Voltamos à empiria com a análise aqui apresentada para seguirmos refletindo e precisando o que há de concreto e de teórico em torno da categoria autonomia.

Nosso argumento, mesmo considerando o Estado como ator central nas interações com os movimentos sociais, desde a ideia marxista de totalidade, não indica que a transformação social só se dá a partir dele, como pode aparentemente parecer. O que afirmamos é que nas sociedades contemporâneas que encontram no Estado legitimidade jurídico-territorial e, supostamente, maior capacidade e recursos para garantir a organização social, as transformações que emanam dos movimentos sociais



sempre se dão com algum tipo de relação com o Estado; e é nessa relação que se expressa a autonomia de movimentos pela transformação do *status quo*.

Sem o objetivo de sermos definitivos, concluímos que no caso do EZLN é na negação do Estado como um todo, ou seja, de todas as suas instituições e políticas e na própria ação cotidiana do movimento, que se dá a partir da construção de vivências que traduzem sua visão de mundo, que se expressa sua autonomia. O Estado estava fechado à cooperação com o EZLN. O movimento decidiu seguir vida própria expressando sua autonomia na rejeição do Estado e na criação de suas próprias formas de vida desde 2003. Estas formas de vida seguem uma regra basilar, portanto: fazer diferente do que faz o Estado. Ou seja, mesmo que já não haja relação concreta com o Estado, há uma relação cognitiva que orienta a ação do movimento ao reconhecer o Estado, rechaça-lo e construir alternativas ao que se rechaçou.

No caso do município de Oxchuc, foi a negação do sistema partidário municipal seguida de uma série de confrontos políticos extrainstitucionais, nos quais o Estado foi o alvo de reivindicações, de exigência de direitos garantidos pela constituição mexicana e de pressão para que a comunidade fosse reconhecida por seus usos e costumes como povo originário que se expressou a autonomia do movimento. No entanto, o Estado estava fechado à cooperação. Oxchuc fez a opção por expressar sua autonomia no confronto político extrainstitucional para alcançar o reconhecimento ao invés de negar o Estado em sua totalidade. A estratégia do MSO surtiu efeitos positivos. Em janeiro de 2019 o município foi reconhecido como povo originário pelo Estado mexicano e em abril do mesmo ano elegeu seu primeiro presidente municipal por usos e costumes, por “mão alçada”, sem a participação de partidos políticos.

Por último, o caso da comunidade de San Andrés Totoltepec começa de forma semelhante com o de Oxchuc: com a negação do sistema partidário, sendo em Totoltepec em nível inferior⁵. Após o reconhecimento do Estado se cria o Consejo Comunitario de Autogobierno que representa a comunidade na interação com as instâncias superiores do Estado. É neste processo de negação e construção que se expressou a autonomia do movimento. O Estado estava, supostamente, aberto à cooperação. San Andrés Totoltepec fez a opção de expressar sua autonomia criando sua própria forma de governança local – o conselho – por dentro das estruturas do Estado numa espécie um Estado aparte dentro do próprio Estado.

Considerando a negação e a construção e as diferenças de cada caso, podemos dizer, sinteticamente, que no primeiro caso o movimento nega e rejeita o Estado em sua



totalidade e, por isto, constrói outros modos de vida a partir de suas diferenças essenciais e de visão de mundo em relação ao Estado. No segundo caso o movimento nega a forma de funcionamento hierárquico e de poder dos partidos e do Estado e, por isto, constrói formas de confronto político extrainstitucional que alcançam mais ou menos pressão, reconhecimento e inclusão de pautas na agenda estatal. E, finalmente, no terceiro caso o movimento também nega a forma de funcionamento dos partidos e do Estado e a impossibilidade de participar dos processos decisórios de ambas estas instituições e constrói suas próprias formas de governo local para representar a população a partir da *inserção em e interação com* as instâncias superiores do Estado.

Notas

¹Mestre em Ciências Sociais, doutorando no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

E-mail: c_omanchi@hotmail.com.

²Doutora em Ciência Política, professora e pesquisadora no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); Pesquisadora do Cebrap. E-mail: m_dowbor@gmail.com

³ As recorrentes citações e comparações com o Brasil se dá pelo fato de os autores do texto atuarem neste país.

⁴ Nombre fictício.

⁵ A constituição da Ciudad de México reconhece os “pueblos” em sua estrutura organizacional. Abaixo das Alcaldías, que estão no mesmo nível dos municípios nos demais estados da federação, estão as colônias, os bairros e os pueblos – estes três no mesmo nível jurídico-territorial.

Referências

Abers, R.; Serafim, L.; Tatagiba, L. (2014) Repertórios de interação Estado- sociedade em um Estado heterogêneo: a experiência na Era Lula. *Dados*, v. 57, n. 2, p. 325–357.

Avritzer, L. (2012) Sociedade civil e Estado no Brasil: da autonomia à interdependência política. *OPINIÃO PÚBLICA, Campinas*, vol. 18, no 2, novembro, p. 383–398.

Barcelos, M.; Pereira, M. M.; Silva, M. K. (2017) Redes, Campos,

Coalizões e Comunidades: conectando Movimentos Sociais e Políticas Públicas. *Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais - BIB*, n. 82, p. 13–40.



Baschet, J. (2017) *Podemos gobernarnos nosotros mismos: La autonomía, una política sin el Estado*. San Cristóbal de las Casas, Chiapas: Universidad de la Tierra, 2017.

Böhm, S.; Dinerstein, A. C.; Spicer, A. (2010) (Im)possibilities of Autonomy Social: Social Movements In and Beyond Capital, the State and Development.

Studies, 9(1), p. 17–32.

Brancaleone, C. (2012) *Sobre o significado da experiência de autogoverno zapatista*. Tese de Doutorado apresentada ao Doutorado em Sociologia da UERJ.

Bringel, B.; Falero, A. (2016) Movimientos Sociales, Gobiernos

Progresistas Y Estado En América Latina: transiciones, conflictos y mediaciones. *Caderno CRH, Salvador*, v. 29, n. SPE 03, p. 27–45.

Castoriadis, C. (1997) Poder, política, autonomía. *Un mundo fragmentado*, Buenos Aires, *Altamira*, p. 1–19.

Clemens, E. S. (1993) Organizational Repertoires and Institutional Change: Women's Groups and the Transformation of U.S Politics, 1890-1920. *American Journal of Sociology*, 98 (4), p. 775–798.

Collin, L. (2012) *Economía Solidaria ¿capitalismo moralizador o movimiento contracultural?* México: El Colegio de Tlaxcala, p. 242.

Dussel, E. (2014) *16 tesis de economía política: interpretación filosófica*.

México: Siglo XXI Editores.

Gohn, M. da G. (1997) *Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos*. 1a ed. São Paulo: Edições Loyola.

Holloway, J. (2011) Las grietas y la crisis del trabajo abstracto. In: Adamovsky, Ezequiel (Org.). *Pensar las autonomías: alternativas de emancipación al capital y el Estado*. 1a ed.- México D.F.: Sísifo Ediciones, Bajo Tierra.

Lavalle, A. G.; Szwako, J. (2015) Sociedade civil, Estado e autonomia: argumentos, contra-argumentos e avanços no debate. *OPINIÃO PÚBLICA, Campinas*, vol. 21, no 1, abril, p. 157–187.



Mora, M. (2018) *Política kuxlejal: Autonomía indígena, el Estado racial e investigación descolonizante en comunidades zapatistas*. Ciudad de México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, p. 320.

Oliveira, G. M. de; Dowbor, M. (2018) As relações entre movimentos sociais e Estado pelo prisma da autonomia: uma revisão da bibliografia recente. *Anais do 42o Encontro Anual da Anpocs, de 22 a 26 de outubro de 2018, em Caxambu - MG.*, p. 1–19.

Polanyi, K. (2000) *A grande transformação. As origens da nossa época*. 2a edição. Rio de Janeiro: Campus.

Skocpol, T. (1992) *Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States*. Cambridge: Belknap Press/Harvard University Press.

Wallerstein, I. (2008) *Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos*.



El movimiento de derechos humanos argentino y su vinculación con el Estado: Un estado de la cuestión hasta H.I.J.O.S. (1976-2015).

Carolina Sofía Tavano¹

Resumen

El movimiento de derechos humanos (MDH) de Argentina presenta una larga trayectoria, cobrando mayor protagonismo en la escena pública durante la “transición democrática” que sucedió a la última dictadura militar (1976-1983). Lejos de presentar una trayectoria lineal desde aquel entonces, el MDH ha atravesado diferentes etapas a lo largo de los ciclos políticos que se configuraron en el país, siendo, a la vez, un movimiento difícil de analizar como un actor colectivo homogéneo, conteniendo una variada y fluctuante composición de organizaciones, articuladas en torno a la demanda de verdad y justicia sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. La vinculación entre el MDH y el Estado ha sido un problema abordado por las ciencias sociales con mayor énfasis en las últimas dos décadas, a partir de diversos estudios de caso de las organizaciones que lo conforman. El objetivo de este trabajo es realizar un estado de la cuestión exhaustivo sobre los trabajos que han abordado esta dimensión del MDH (a partir de una revisión bibliográfica), recuperando las experiencias de las organizaciones que han configurado sucesivas generaciones dentro del MDH, analizando con mayor profundidad la de una de las últimas organizaciones que se incorporó al MDH en 1995, conformada por las/os hijas/os de las víctimas del terrorismo de Estado: H.I.J.O.S. Este trabajo pretende discutir la productividad de las teorías que ubican al MDH como un movimiento “cooptado” por la estructura estatal a partir del año 2003, problematizando las diferentes modalidades de vinculación y decisiones estratégicas adoptadas por los actores que lo conforman.

Palabras clave

Movimiento de derechos humanos; Estado; Kirchnerismo; Hijos.

Introducción

El problema de la vinculación entre la movilización social y el Estado constituye un eje que cobró protagonismo en los estudios de movimientos sociales latinoamericanos desde los años 2000. Diversos autores han explicado el despertar de este interés en las ciencias sociales como efecto de las transformaciones políticas que se desplegaron en la región luego de la ola de dictaduras militares de las décadas de los setenta y ochenta,



atendiendo a los procesos y actores políticos implicados en la reconstrucción del régimen democrático en los distintos países, a la par de la consolidación y posterior crisis del modelo neoliberal.

En Argentina, este interés también se replicó en el campo de estudios sobre movimientos sociales y acción colectiva, en particular, desde la segunda mitad de los años 2000 frente a las novedades políticas que presentó el gobierno nacional presidido por Néstor Kirchner desde el año 2003, el cual inauguraría un nuevo ciclo político (que denominaremos kirchnerista²) en lo referente a las características que adoptaría la movilización social y las articulaciones que se establecieron con el régimen político de gobierno³, en los años que siguieron al estallido social del 2001-2002.

Sin embargo, en dicho campo de estudios fue menor la importancia que se le dio al caso del “movimiento de derechos humanos” (MDH), un actor colectivo de larga trayectoria y que ha tenido un importante protagonismo en la escena pública y política argentina desde los últimos años de la dictadura (que se extendió hasta 1983) y hasta nuestros días. Mientras que algunos trabajos centrados en analizar los ciclos de movilización de los ochenta, noventa y dos mil en Argentina citaron al MDH entre un conjunto más amplio de movimientos y organizaciones que ocupaban las calles con diversas demandas, son escasos los trabajos que han tenido como objeto central al MDH y que, al mismo tiempo, han problematizado la vinculación con el Estado dando cuenta de sus continuidades, transformaciones y tensiones llegando hasta el fin del ciclo kirchnerista⁴. En este sentido, son aún menos los estudios que han analizado y reflexionado sobre el caso de una de las últimas organizaciones incorporadas al MDH: la agrupación “Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio” (H.I.J.O.S.), surgida en el año 1995 en torno a la figura de las hijas/os de las víctimas directas del terrorismo de Estado durante la última dictadura en Argentina.

El propósito de esta ponencia consiste en recuperar y sistematizar los estudios que sí han problematizado dicha vinculación, a partir de un análisis bibliográfico crítico que permita reflexionar sobre los alcances y limitaciones de estos trabajos, planteando interrogantes y líneas de análisis plausibles de explorar a futuro. Consideramos que este recorrido centrado en el caso del MDH reviste una importancia fundamental, siendo a nuestro entender uno de los casos emblemáticos para comprender las transformaciones en los ciclos de movilización en la Argentina, sentando las bases, al mismo tiempo, que nos permitan avanzar en el conocimiento de la dinámica de vinculación que se construyó entre este movimiento, en particular, y el Estado hasta los últimos años.



Por último, cabe mencionar que la presente ponencia constituye un avance de la investigación en curso conducente a desarrollar una tesis doctoral en el marco del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES-UNGS), bajo la dirección del Dr. Enrique Andriotti Romanin y Dra. Melina Vázquez, cuyo objetivo general consiste en analizar el vínculo entre el MDH y el Estado en Argentina, a partir del caso de la agrupación H.I.J.O.S.

El campo de estudios sobre la movilización social en Argentina y el lugar ¿secundario? del Movimiento de Derechos Humanos

Durante las últimas dos décadas, el campo de estudios sobre movimientos sociales en Argentina ha expandido notablemente el volumen de trabajos dedicados a pensar la vinculación entre la movilización política y el Estado, y sus transformaciones. Los cambios en el régimen político de gobierno configurados a lo largo de ese período constituyeron un terreno fértil para pensar la participación de “nuevos” y “viejos” actores en la vida democrática, en especial con posterioridad a la crisis institucional y política de los años 2001-2002 (Pereyra, 2013).

Uno de los actores que se ha mantenido activo en la escena política nacional, con mayor o menor visibilidad, desde la década de 1970 es el MDH. La denominación de este “movimiento” surge como categoría nativa de los propios actores que lo conformaron⁵ (luego adoptada por los elencos políticos, la academia y la sociedad en general) y refiere a un conjunto heterogéneo de organizaciones y activistas que llevan adelante acciones públicas y demandas hacia el Estado por el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a manos de agentes y burocracias estatales. Si bien son cuantiosas las dificultades que presenta analizar al MDH como un actor colectivo unívoco (con límites definidos y estables), y requieren de una serie de reparos metodológicos que consideren la gran diversidad de organizaciones, su heterogeneidad (diferentes trayectorias, posicionamientos políticos e ideológicos disímiles y sus transformaciones a lo largo de la etapa democrática), consideramos que dicha categoría contiene aún enorme vitalidad. En este sentido, postulamos que resulta a priori una categoría válida para abordar el activismo político en torno a la “causa de los derechos humanos” en el país, hegemonizado desde finales de 1970 por las demandas vinculadas al esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, los pedidos de justicia y las “luchas por la memoria”⁶.

Los primeros trabajos que tomaron al MDH como objeto de estudio pueden rastrearse en los años ochenta, los cuales comenzaron al mismo tiempo a problematizar su



relación con el Estado, centrando su interés mayormente en las organizaciones de “afectados directos” o familiares. Entre las primeras investigaciones, se destacan las de Jelin (1985, 1995), Veiga (1985), Leis (1989), García Delgado y Palermo (1989), Brysk (1994), Jelin y Azcárate (1991), Sikkink (1996). Estos autores, a partir del estudio de distintas organizaciones del MDH, han dado cuenta de sus posicionamientos frente a la democracia, los gobiernos y las políticas estatales durante los años de post-dictadura llegando hasta la década de los noventa.

Recién a mediados de la década del 2000, en el marco de una revitalización de los estudios sobre movimientos sociales en Argentina, comenzaron a surgir investigaciones que centraron su atención en las zonas de articulación entre el MDH y el Estado, profundizando esta dimensión de análisis dando cuenta, conjuntamente, de las transformaciones políticas de mayor alcance y las que atravesarían las propias organizaciones del MDH. (Jelin, 2003, 2007; Pereyra, 2005, 2008)

Siguiendo a Andriotti Romanin (2012a), entre este corpus de investigaciones es posible identificar dos grandes tendencias a la hora de abordar la vinculación entre el MDH y el Estado: un enfoque centrado en establecer los “modelos de vinculación” y otro, en realizar un “análisis de las interacciones”. Mientras que el primero ha caracterizado ese vínculo como de confrontación, por un lado, o de cooperación, por el otro, permitiendo poner de relieve una dinámica altamente cambiante en las modalidades históricas de vinculación y planteando la importancia de analizar empíricamente distintas escalas sub-nacionales y niveles institucionales donde se despliegan tanto la cooperación como la confrontación; el segundo ha puesto el énfasis en el abordaje de las interacciones entre el MDH y el Estado, distanciándose de una lectura polarizada, dando cuenta de la alta gradación empírica entre sus posibilidades de vinculación, a partir del estudio de las coyunturas políticas específicas que permiten visualizar formas múltiples y cambiantes de vinculación histórica, las estrategias y negociaciones entre ambos.

El creciente protagonismo de esta dimensión de análisis, centrada en la vinculación con el Estado, no es un fenómeno restringido a este caso sino que, como adelantábamos en nuestra introducción, ha sido señalado como un rasgo propio de los estudios sobre movimientos sociales a nivel regional y nacional. El surgimiento de esta perspectiva se explicaría, en parte, a raíz de lo que Svampa (2008) denomina “cambio de época”, es decir, la correlación con los cambios estructurales que comenzaron a vislumbrarse desde el ocaso del modelo neoliberal en Latinoamérica (fines de 1990 y principios de los 2000). En este contexto, se desarrollaron diferentes líneas de investigación



fuertemente orientadas a comprender la movilización social que estuvo en la base del “estallido social” de la crisis de los años 2001-2002 en la Argentina, los (re) posicionamientos de los actores políticos y la emergencia de nuevos a partir de los años 2003-2004, y los cambios institucionales que sucedieron a la renovación política a nivel nacional (Pereyra et al, 2013).

Acerca de las lecturas que suscitaron estas transformaciones, una primera línea de estudios presentó una mirada impugnadora de esa vinculación con el Estado, poniendo en relieve los riesgos de la “burocratización” y la tendencia a la “cooptación” de los movimientos sociales por las estructuras políticas “tradicionales”, considerando que este camino llevaría a la pérdida de radicalidad y movilización que caracterizaba la lógica de estos actores colectivos. (Oviedo, 2004; Campione y Rajland, 2006; Zibechi, 2009)

Desde la segunda mitad de los años 2000, proliferó una línea alternativa a aquel enfoque, proponiendo analizar desde la sociología política las trayectorias de distintas organizaciones, reflexionando al mismo tiempo sobre el vínculo entre las transformaciones de la movilización social y las relaciones con el régimen político de gobierno, aportando elementos al debate iniciado por las teorías clásicas de los movimientos sociales. Un primer conjunto de trabajos apuntaron a interpretar este proceso como un avance en la “institucionalización” de los movimientos, considerando la tensión entre “autonomía” y “cooptación” que puede caracterizar el vínculo de diversas organizaciones con las estructuras políticas “tradicionales” (Gómez, 2006, 2010; Svampa, 2006, 2008; Cortes, 2008; Gómez y Massetti, 2009). Un segundo conjunto de trabajos, buscando también distanciarse de aquellas nociones que implicarían “cooptación” o acciones meramente instrumentales, fundadas en una plena autonomía política para caracterizar a los movimientos sociales locales, siguieron un enfoque pragmático proponiendo pensar el fenómeno en torno a la noción de articulación, en tanto mediación entre la sociedad civil y el régimen político, valiéndose del concepto de gramática política⁷ⁱ para problematizar las trayectorias de diversas organizaciones (Natalucci, 2008, 2010a, 2010b; Pérez y Natalucci, 2010, 2012).

A su vez, las zonas de articulación entre el Estado y los diferentes actores de la sociedad civil fueron abordadas por estudios del campo de la antropología de la política, que indagaron los procesos de elaboración e implementación de políticas públicas; el funcionamiento de determinados espacios estatales, recuperando, a partir de un enfoque etnográfico, la perspectiva de los actores involucrados; la problematización de algunas dimensiones que hacen al funcionamiento de lo estatal, como las características



del personal, los vínculos entre saberes expertos y capitales militantes; los entramados burocráticos, entre otras. Desde esta perspectiva, el “Estado” no es analizado como un agente monolítico u homogéneo, con fronteras fijas, claras y estables en el tiempo. Por el contrario, la construcción de dichas fronteras se concibe como el producto de una trama de disputas y de relaciones entre diferentes actores, los cuales ponen en juego sus concepciones y saberes en contextos específicos. (Manzano, 2004; Soprano, 2007; Balvi y Boivin, 2008; Bohoslavsky y Soprano, 2010; Heredia, Gené y Perelmiter, 2012; Perelmiter, 2012; Vázquez, 2015; Longa, 2019)

A pesar de la proliferación de trabajos que se enfocaron en el análisis de esta dimensión durante la década del 2000, la trayectoria política del MDH y las zonas de articulación con el Estado que comenzaban a desarrollarse o modificarse en aquellos años no fueron observadas de modo sistemático desde el campo de estudios de los movimientos sociales y acción colectiva. Cuando esta problemática fue abordada, no se indagó en profundidad cómo se constituyeron esas articulaciones y qué efectos tuvieron en las organizaciones. La primacía de enfoques que posicionaban a las organizaciones de derechos humanos en un lugar de “cooptación”, ofrecieron interpretaciones que enfatizaron la pérdida de autonomía y pasividad frente al aparato estatal (Novaro, 2008; Sarlo, 2011, 2013; Svampa, 2016, 2018); el debilitamiento a raíz de su creciente institucionalización (Alonso, 2009); las motivaciones con fines instrumentales y/o la búsqueda de retribuciones materiales/económicas (Svampa, 2016), por citar algunos ejemplos destacados. Este conjunto de interpretaciones tributaron a la idea que sindicaba estos procesos como consecuencia de una estrategia desplegada por el poder dominante tendiente a reabsorber la protesta social -estrategia especialmente desplegada durante los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner- (Romero, 2012:479).

Sin embargo, algunos autores han buscado distanciarse de esta perspectiva, estudiando el vínculo de algunas de las organizaciones de derechos humanos con el Estado y, en particular, su articulación con los gobiernos nacionales en torno a lo que es posible identificar como una relativa afinidad ideológica. A partir de un proceso de interpelación exitoso, los gobiernos kirchneristas habrían facilitado instancias de cooperación a partir de una adhesión ideológico-afectiva, acompañado también de la incorporación de las demandas del movimiento a la agenda gubernamental, sin implicar esto un proceso de desmovilización, llegando incluso a fomentar el fortaleciendo de las organizaciones (Barros, 2009; Retamozo, 2011; Morales, 2012; Montero, 2012;



Retamozo y Muñoz, 2013). Cercano a esta interpretación, Andriotti Romanin analizó el caso de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la vinculación de una parte del MDH con los gobiernos kirchneristas en clave de oportunidad política. Este autor, interpreta el vínculo político como el resultado de factores ideológicos, interpretativos por parte de los actores, pero también estratégicos, concibiendo esta articulación en tanto herramienta útil para incidir en la definición e implementación de políticas públicas (2012a, 2012b, 2013, 2014). Por último, constituyen referencias relevantes un conjunto de trabajos que analizaron la articulación entre el Estado y algunas organizaciones de derechos humanos desde un abordaje etnográfico, que observa diferentes emprendimientos de "memoria"; los procesos de institucionalización y gestión de los "espacios"; y la participación de distintos actores, mostrando las heterogeneidades y tensiones entre los integrantes de las organizaciones involucradas (Guglielmucci, 2011; Vecchioli, 2013; Messina, 2015, 2016; Cueto Rúa, 2016a, 2016c).

Respecto del recorrido bibliográfico propuesto hasta el momento, es posible sostener que, en líneas generales, cuando se ha analizado el vínculo entre el MDH o sus organizaciones y el Estado las lecturas de estos procesos se situaron mayormente en una polarización, inclinándose a comprender la relación en términos de cooptación o interés económico, por un lado, o de pura adhesión/integración, por el otro, sin profundizar en las fluctuaciones, tensiones o conflictos que esto podría haber generado al interior de las organizaciones y del MDH. Estas lecturas se desprenden en gran medida de una conceptualización reificada del Estado que, a nuestro entender, obturan el análisis, invisibilizando otras dimensiones como, por ejemplo: cuáles son las maneras concretas de habitar el Estado por parte de las organizaciones, los debates internos que se dan en las mismas a raíz de considerar la opción de "estar en el Estado" y sus condiciones de posibilidad.

Un nuevo actor, miradas académicas no tan nuevas: la incorporación de H.I.J.O.S. al MDH

Desde su surgimiento y primeras acciones a mediados de los noventa en distintas partes del país, la agrupación H.I.J.O.S ha llamado la atención de las/os científicas/os sociales. Tempranamente, identificaron la emergencia de este actor político que se alinearía con las principales demandas y objetivos compartidos por las organizaciones del MDH, aunque con una impronta generacional⁸ particular que se expresó en diferencias estratégicas y políticas, repertorios de acción novedosos, promoviendo a la vez lecturas



alternativas sobre el pasado reciente. (Jelin, 2007; Pereyra, 2001, 2005, 2008; Kotler, 2013; Barros y Morales, 2017)

Por otra parte, H.I.J.O.S. despertó interés en los estudios de las juventudes políticas, dado el marcado protagonismo que la agrupación alcanzó durante el ciclo de protestas que movilizó al país desde la segunda mitad de la década de 1990 (Blanco, 2006; Bonvillani et al, 2008; Vommaro, 2015); prestándose particular atención a los “escraches” como parte de un repertorio de acción innovador, constitutivo del activismo político de H.I.J.O.S. (Vezzetti, 1998; Zibechi, 2003; Espeche, 2005; Bonaldi, 2006b; Cueto Rúa, 2010c; Bravo, 2012).

La línea más amplia de trabajos sobre H.I.J.O.S. se ubica entre los estudios que exploraron la relación entre la memoria social y los actores que las producen. Diferentes investigadores han abordado a esta agrupación en clave generacional, observando su papel en la elaboración de interpretaciones, narrativas y prácticas en el espacio público en el marco de las luchas por la memoria y los sentidos vinculados al pasado reciente (Bravo, 1999, 2012; Da Silva Catela, 2001, 2016; Alonso, 2003; Bonetto, 2006; Peller, 2009, 2013; Basile, 2019), poniendo su eje, también, en la dimensión identitaria y la articulación entre política y parentesco, como problema que ponen de relieve gran parte de las organizaciones del MDH (Amado, 2003a, 2003b; Cepeda, 2013; Vecchioli, 2005, 2013; Gatti, 2011; Kotler, 2013).

A pesar de este amplio conjunto de antecedentes, en el campo de la sociología política no abundan los estudios que hayan tomado a esta agrupación, su trayectoria política y sus vinculaciones con el Estado como objeto central; debiéndose, quizás, a la complejidad y dinamismo que ha caracterizado a este actor colectivo. Su organización bajo un formato de “Red Nacional” generaría algunas tensiones entre las diferentes agrupaciones regionales, que funcionaron de manera articulada pero privilegiando la autonomía, desencadenando, en algunos casos, rupturas de ciertas agrupaciones con la Red, como también divisiones internas (producto de conflictos vinculados al funcionamiento de la agrupación o a definiciones políticas de mayor alcance), reuniendo finalmente bajo el nombre de H.I.J.O.S. un conjunto bastante heterogéneo de experiencias y posiciones (por ejemplo, acerca de la relación con el Estado).

Quizás sea debido a esa heterogeneidad que los estudios que tomaron por objeto a la agrupación H.I.J.O.S. se hayan orientado a analizar los casos de algunas regionales en particular. Se destaca, en primer lugar, el trabajo de Bonaldi (2006a) quien analizó el caso de H.I.J.O.S. en Capital Federal, observando diferentes dimensiones de la



organización (su funcionamiento, objetivos, repertorios de acción, la construcción identitaria) y las fragmentaciones que tuvieron lugar durante su primera década. También, los trabajos de Alonso, centrados en el MDH en Santa Fe y especialmente en el caso de H.I.J.O.S. en diversos artículos (2005, 2011, 2016). Por otro lado, Cueto Rúa analizó en profundidad la trayectoria de H.I.J.O.S. La Plata (2009, 2010a, 2010b, 2016b). Además, existe un conjunto de trabajos que han explorado el surgimiento de H.I.J.O.S. en algunas de sus regionales, como la tesis previamente citada de Kotler (2013), quien dedicó un capítulo a analizar el surgimiento de H.I.J.O.S. Tucumán en su investigación sobre el MDH en dicha provincia; Bravo (1999), para el caso de H.I.J.O.S. Mendoza y Ghigliazza (2018), quien indagó en el surgimiento y los primeros años de H.I.J.O.S. en Mar del Plata.

Entre estos autores, Alonso (2009, 2011) y Cueto Rúa (2009, 2016a) son quienes prestaron mayor atención al repertorio de acciones desplegadas por las agrupaciones de H.I.J.O.S. a lo largo de su trayectoria política y su vinculación con el Estado. Alonso (partiendo de una concepción del Estado como estructura de dominación que habilita un campo de lucha por el poder) concibió la vinculación de las organizaciones con las agencias estatales como un movimiento dialéctico que fluctuaría entre la resistencia y la normalización/institucionalización. Para el autor, durante los años 2000 H.I.J.O.S. (como parte del MDH en Santa Fe) habría tendido a situarse en este último polo, transitando un proceso de debilitamiento y pérdida de autonomía a partir del avance de una “estatización de la memoria” que habría significado la progresiva inclusión de cuestiones relativas a los recordatorios del terror de Estado en las agendas oficiales. Cueto Rúa, desde otro enfoque teórico, se centró en problematizar este vínculo desde la perspectiva de los actores, construyendo una mirada heterogénea y no lineal, reponiendo cómo ellos fueron definiendo los límites o construyeron y transitaron “zonas de porosidad” con el Estado en diferentes coyunturas políticas (enfoque que fue profundizado en su tesis sobre la creación de la Comisión Provincial de la Memoria en la Plata, aunque otorgándole un lugar secundario al análisis de la participación de las/os “hijas/os”).

Una línea aparte merece la tesis de Surraco (2013), quien problematizó el vínculo entre las/os “hijas/os” y el Estado analizando las “políticas reparatorias” desde la perspectiva de la agrupación Colectivo de hijos (conformada por algunos ex militantes de H.I.J.O.S., siendo el propio autor uno de sus fundadores). En su investigación, reflexionó acerca de las políticas reparatorias, sus implicancias y significados, a la vez que reconstruyó el



surgimiento de esta nueva agrupación que se diferencia de H.I.J.O.S. en sus lineamientos políticos, memoriales y las formas de concebir sus activismos.

En síntesis, basándonos en el relevamiento bibliográfico antes presentado, encontramos que son pocos los estudios que se han abocado al estudio de la trayectoria política de la agrupación H.I.J.O.S. a lo largo de los años de gobiernos kirchneristas (2003-2015), profundizándose esta vacancia respecto de estudios que problematicen la articulación entre H.I.J.O.S. y el Estado a lo largo de este período, dejando de lado también el análisis de las posibles tensiones, asimetrías o similitudes que podrían darse entre diversas regionales de la agrupación (con sede en distintas localidades) con los diferentes niveles del Estado. En línea con los trabajos que han explorado esta vinculación desde distintas organizaciones del MDH, también se imponen miradas que tienden a interpretar la profundización de ese vínculo (en los casos en que ocurrió) en clave de cooptación y desmovilización en razón de una estrategia del poder gobernante (Alonso, 2009), evidenciando, además, algunas de estas indagaciones escasa rigurosidad analítica y metodológica en el tratamiento de informes y libros periodísticos (Di Marco, 2012; Gasulla, 2012). Al mismo tiempo, las investigaciones que abordaron a la agrupación no profundizaron en las rupturas, desprendimientos y conformación de nuevas organizaciones, las desafilaciones o nuevas incorporaciones de militantes, o los itinerarios políticos de quienes se alejaron esos espacios de participación.

Recuperando la lectura de Goirand (2013), quien postula que cuando se ha estudiado la vinculación entre movimientos sociales y Estado en Latinoamérica se ha impugnado su carácter problemático antes que intentar comprender el fenómeno en su complejidad, vemos que este rasgo se exagera entre los estudios sobre el MDH y en particular, de la organización H.I.J.O.S.. Encontramos, por un lado, investigadores que realizaron importantes aportes al estudio de la agrupación en su formación originaria, teniendo en cuenta alguna de sus regionales (como el de Bonaldi, 2006 y Cueto Rúa, 2009) pero que luego no continuaron su análisis en los años siguientes; por otro lado, distintos autores han estudiado alguno de los rasgos de la organización pero de forma fragmentaria (su dimensión identitaria, el repertorio de acciones, las construcciones memoriales, entre otras); y de manera excepcional, es posible hallar algún trabajo que problematice las nuevas formaciones políticas, desprendimientos colectivos o individuales de H.I.J.O.S., como es el caso del Colectivo de Hijos (Surraco, 2013).



Reflexiones finales

A modo de balance, hemos visto a través del recorrido bibliográfico previo que el caso del MDH, incluyendo las generaciones más recientes, no ha sido un objeto privilegiado dentro del campo de estudios de los movimientos sociales en Argentina. A pesar de encontrarse valiosos antecedentes que han abordado el caso de este movimiento, han sido escasos los estudios que problematizaron su vinculación con el Estado y, cuando esta dimensión fue analizada, primaron lecturas polarizadas sobre el fenómeno, tendientes a asignar al MDH un lugar pasivo, de cooptación por parte de las “estructuras de poder dominantes”, o por el contrario, de plena autonomía frente a las mismas, guiados por fines instrumentales y estratégicos, tendientes a incrementar sus recursos. Consideramos que estas lecturas se fundan en una concepción reificada del Estado y que, justamente, avanzar en su deconstrucción, hacia una mirada destotalizante del mismo, puede permitirnos avanzar sobre nuevos interrogantes que enriquezcan la comprensión del fenómeno de su vinculación con los movimientos sociales, apuntando a dilucidar la complejidad que compone esas relaciones, a la luz de tensiones y también de colaboraciones.

En esta línea, tampoco se ha estudiado dicho proceso con énfasis en la perspectiva de las/os militantes, a través de una mirada que ponga en cuestión los discursos oficiales de las organizaciones y sus voceros para abordar el espectro de interpretaciones de los actores sobre esos vínculos; es decir, cómo las/os militantes explican y dan sentido a la relación con el Estado, teniendo en cuenta sus diversas carreras laborales, militantes, educativas y otras condiciones personales.

En lo que refiere al estudio de las generaciones incorporadas más recientemente al MDH, siendo H.I.J.O.S. la organización más destacada, también encontramos una vacancia de estudios que hayan puesto el foco en sus diversas articulaciones con el Estado, sobre todo entre los años 2003- 2015, aspecto que consideramos merece una mayor observación, debido a la diversidad y dinamismo de experiencias que se han desarrollado durante el período.

Al mismo tiempo, la heterogeneidad y complejidad de la organización H.I.J.O.S. quizás haya desalentado su análisis desde la sociología política; un desafío que creemos vale la pena afrontar, en pos de comprender a un actor político que ha venido ocupando un lugar protagónico en la esfera pública nacional desde hace casi veinticinco años. En este sentido, señalamos algunas de las líneas que consideramos restan por explorarse en relación con este caso y que intentaremos llevar a cabo en las próximas etapas de



investigación: la implementación de un análisis comparativo de las distintas regionales, para aprehender la diversidad dentro de esta organización de carácter nacional y en particular, la gama de modalidades de articulación con el Estado que se pusieron en juego; el estudio de la articulación de H.I.J.O.S. con otras juventudes políticas, apuntando a comprender la configuración de un ciclo de movilización juvenil durante el kirchnerismo que presenta ciertos cambios y continuidades con respecto al de los noventa; y por último, un análisis de la trayectoria de la organización y sus vínculos con el Estado que tienda a superar las visiones dicotómicas sobre el fenómeno, buscando una perspectiva “intermedia” (Longa, 2019) que recupere la heterogeneidad de experiencias, interpretaciones y las tensiones que podría haber suscitado.

Notas

¹(CONICET-UNMDP/CESP). carotavano@gmail.com

² Entendemos por ciclo kirchnerista al período comprendido entre los años 2003-2015, que tuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional en Argentina al Presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y a Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

³ Se entiende por régimen político de gobierno al sistema de instituciones que median entre la sociedad civil y el proceso de tomas de decisiones políticas. (Nun, 1987)

⁴ Cabe mencionar dos trabajos recientes de Cueto Rúa (2016) y Messina (2016) que han avanzado en esta reflexión y comparten gran parte de nuestros objetivos, aunque con una mayor inscripción académica en el campo de estudios de memoria social y antropología, no establecen un diálogo con el corpus bibliográfico sobre movimientos sociales y acción colectiva.

⁵ El MDH está conformado por dos grandes grupos de organizaciones: por un lado, los que se nuclearon en torno a la figura de los “afectados” directamente por la represión (organizaciones de familiares, madres, abuelas, ex detenidos-desaparecidos e hijosiv) y por otro lado, los “no afectados” (entre las principales organizaciones: el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH-, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre –LADH-, El Servicio de Paz y Justicia –SERPAJ-, el Movimiento EcuMénico por los Derechos Humanos –MEDH- y el Movimiento Judío por los Derechos Humanos –MJDH-). A su vez, estas organizaciones emergieron en diferentes momentos históricos: siendo la LADH la única fundada previa al Golpe de 1976, la gran mayoría de ellas se formaron entre 1976-1983, incorporándose luego la Asociación de ExDetenidos en 1984 y finalmente, H.I.J.O.S. en 1995 (Jelin, 1995)



⁶ Las múltiples acciones referidas a la violencia institucional y violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la democracia, así como otros ámbitos de acción, no serán abordados dado que superan ampliamente las posibilidades del presente plan.

⁷ El concepto de gramática política da cuenta de las reglas y usos que dotan de un principio de inteligibilidad a las acciones, delimitando, por un lado, las pautas de interacción de los sujetos y por otro, las combinaciones de acciones para coordinar, articular e impulsar intervenciones públicas, dirigidas a cuestionar, transformar o ratificar el orden social. (Pérez y Natalucci, 2012)

⁸ Para referirnos a lo generacional se parte de una noción sociohistórica y relacional, que dista de concebir a un conjunto delimitado por su pertenencia a una cohorte de edad, entendiéndolo más bien como un rasgo que articula a un grupo de sujetos, el cual remite a un momento histórico de socialización particular y una causa o problema compartido en torno al cual se movilizan procesos de identificación (Vommaro, 2015).

Referencias Bibliográficas

Alonso, L. (2016) ¿Por qué seguir reflexionando a 20 años de HIJOS? Cuadernos de Aletheia. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/59510>

_____ (2011) Agrupaciones juveniles, derechos humanos y memorias en perspectiva comparada: entre la resistencia y la normalización. Ponencia presentada en XIII Jornadas Interescuelas de Historia, Catamarca.

_____ (2009) Memorias sociales y Estado en Santa Fe, Argentina, 2003-2008. Revista Política y Cultura No 31. México: Universidad Autónoma de México, pp. 27-47.

_____ (2005) Repertorios de acción y relaciones institucionales en H.I.J.O.S. Santa Fe, 1995-2003. Revista Temas y Debates No 9. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. UNR. Rosario.

_____ (2003) Construcción de la identidad y acción social en H.I.J.O.S. Santa Fe. En: Actas del 2do. Congreso de Problemáticas Sociales Contemporáneas, Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe.

Amado, A. (2003b) Memoria, parentesco y política. Debate Feminista, 28, 51-75.

_____ (2003a) Herencias. Generaciones y duelo en las políticas de la memoria. Revista iberoamericana, 69(202), 137-153.

Andriotti Romanin, E. (2014) ¿Cooptación, oportunidades políticas y sentimientos? Las Madres de Plaza de Mayo y el gobierno de Néstor Kirchner. Revista Polis, no 39, año 2014. Disponible en: <http://polis.revues.org/10484>



_____ (2013) Decir la verdad, hacer justicia: Los Juicios por la Verdad en Argentina. En: *European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, p. 5-23. Disponible en: <<https://goo.gl/h6HJKc>>

_____ (2012a) De la confrontación a la cooperación. Los cambios en las estrategias y marcos interpretativos del Movimiento de derechos humanos de Argentina frente al “Kirchnerismo” (2003-2011). En: Tejerina, P. y Perugorria, I. (eds.). *Global Movements, National Grievances. Mobilizing for ‘Real Democracy’ and Social Justice*. Bilbao: Universidad del País Vasco, pp. 54 a 79.

_____ (2012b) De la resistencia a la integración. Las transformaciones de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en la “era Kirchner”. *Revista Estudios Políticos*, Universidad de Antioquia, Colombia. N° 41, Pp. 35-54.

Balvi, G. y Boivin, M. (2008) La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y gobierno. *Cuadernos de Antropología Social* No 27, pp. 7–17.

Barros, M. (2009) El discurso de los derechos humanos en la Argentina de la post-transición: un análisis discursivo de Alfonsín a Kirchner. En: *Actas IX Congreso Nacional de Ciencias Políticas: Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en las relaciones de poder*, Ciudad de Santa Fe, 19 al 22 de agosto de 2009.

Barros, M. y Morales, V. (2017) Cuando los derechos humanos se constituyen en políticas de Estado. (En)clave Comahue, N°22, año 2017. Pp. 45.64.

Basile, T. (2019) *Infancias. La narrativa argentina de HIJOS*. Villa María: EDUVIM.

Blanco, R. (2006) *Los jóvenes y la memoria colectiva. Representaciones de la política y de la militancia en el discurso de las generaciones postdictadura*. Tesis de Licenciatura, UBA, F-SOC.

Bohoslavsky y G. Soprano (eds.) (2010) *Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en la Argentina (desde 1880 a la actualidad)*. Universidad Nacional de General Sarmiento y Prometeo Libros. Buenos Aires.

Bonaldi, P. (2006a) *Hijos de desaparecidos. Entre la construcción de la política y la construcción de la memoria*. En: Jelin, E. y Sempol, D. (comps.) *El pasado en el futuro: los movimientos juveniles*. Buenos Aires: Siglo XXI. Pp.143-184.

_____ (2006b) *Si no hay justicia, hay escrache*. Apuntes de investigación No11; Buenos Aires.

Bonetto, M. S. (2006) *Memoria e Identidad: la agrupación H.I.J.O.S. en Argentina*. *Imago Americae*. No 1. Buenos Aires.



- Bonvillani, A., Palermo, A., Vázquez, M., & Vommaro, P. (2008) Juventud y política en la Argentina (1968-2008): Hacia la construcción de un estado del arte. *Revista argentina de sociología*, 6(11), 44-73. Disponible en: <<https://bit.ly/3rYSuYe>>
- Bravo, N. (2012) HIJOS en Argentina: La emergencia de prácticas y discursos en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. *Sociológica (México)*, 27(76), 231-248.
- _____ (1999) La idea benjaminiana de redención del pasado en el discurso y la práctica de Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S). *Utopía y Praxis Latinoamericana*, vol 4, n° 8. Disponible en: <<https://bit.ly/3pSroAg>>
- BRYSK, A. (1994) *The politics of human rights in Argentina: protest, change, and democratization*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Campione, D. y Rajland, B. (2006) Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante. Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos. En: Caetano, G. (Comp.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 297-330.
- Cepeda, A. (2013) Narrativas familiares y memoria de la pos-dictadura en Argentina: el caso de HIJOS de desaparecidos. *Asian Journal of Latin American Studies*, 26(1), 25-45.
- Cortes, M. (2008) *Movimientos sociales y estado en Argentina: entre la autonomía y la institucionalidad*. Informe final del concurso: "Gobiernos progresistas en la era neoliberal: estructuras de poder y concepciones sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO." Disponible en: <<https://bit.ly/2L4q9zh>> (Cons.27-05-15)
- Cuadros Garland, D. y Vecchioli, V. (2008) La expertise en derechos humanos. Un análisis comparado de las trayectorias profesionales y militantes de abogados comprometidos con esta causa en Chile y en Argentina. *Actas del IX Congreso Argentino de Antropología Social*, disponible en: <http://cdsa.aacademica.org/000-080/275.pdf>
- Cueto Rúa, S. (2016a) "Ampliar el círculo de los que recuerdan". La inscripción de la Comisión Provincial por la Memoria en el campo de los derechos humanos y la memoria (1999-2009). Tesis de posgrado, UNLP. Disponible en: <<https://bit.ly/3ni9ipQ>>
- _____ (2016b) El Surgimiento de la agrupación H.I.J.O.S.. Cuadernos de Aletheia, no2, Maestría en Historia y Memoria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/59511>



_____ (2016c) Apuntes para pensar el campo de los derechos humanos y la memoria. IX Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2016, Ensenada, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: <<https://bit.ly/2LoOOhG>>

_____ (2010a) HIJOS de víctimas del terrorismo de Estado. Justicia, identidad y memoria en el movimiento de derechos humanos en Argentina, 1995-2008. Historia Crítica No. 40, Bogotá, enero-abril 2010.

_____ (2010b) El surgimiento de la agrupación HIJOS-La Plata: La discusión por quienes son las víctimas del terrorismo de Estado. Sociohistórica (27), 137-163.

_____ (2010c) Demandas de justicia y escrache en HIJOS La Plata. Trabajos y comunicaciones, (36), 165-183.

_____ (2009) Nacimos en su lucha, viven en la nuestra: Identidad, justicia y memoria en la agrupación HIJOS-La Plata. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, disponible en: <<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.427/te.427.pdf>>

Da Silva Catela, L. (2016) Irrumpir/decir/superponer. La perpetua construcción de una memoria conflictiva. Cuadernos de Aletheia No2, octubre 2016. Pp. 20-28

_____ (2001) No habrá flores en la tumba del pasado: la experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. Al Margen, Ediciones.

Di Marco, L. (2012) La Cámpora: Historia secreta de los herederos de Néstor y Cristina Kirchner. Buenos Aires: Sudamericana.

Espeche, C. E. (2005) Comunicación y derechos humanos: los escraches de la agrupación HIJOS desde la óptica de la comunicación alternativa. Question. Vol 1, no 7, año 2005. Disponible en: <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/106>

García Delgado, D. y Palermo, V. (1989) El movimiento de derechos humanos en la transición a la democracia en la Argentina. En: Camacho, D. y Menjivar, R. (Eds) Los movimientos populares en América latina. México: Universidad de las Naciones Unidas.

Gasulla, L. (2012) El negocio de los derechos humanos. Buenos Aires: Sudamericana.

Gatti, G. (2011) El lenguaje de las víctimas: silencios (ruidosos) y parodias (serias) para hablar (sin hacerlo) de la desaparición forzada de personas. universitas humanística, (72).

Ghigliazza, C. J. (2018) "Los hijos e hijas que nos volvimos H.I.J.O.S." El surgimiento de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, Contra el Olvido Y el Silencio (H.I.J.O.S) de Mar del Plata (1995-1997). Tesis de Licenciatura, Dto. De Sociología, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.



Goirand, C. (2013) Pensar los movimientos sociales en America Latina. Perspectivas sobre las movilizaciones a partir de los años setenta. *Antropología y Sociología: Virajes*, 15(1), pp. 21-53.

Gómez, M. (2010) Acerca del protagonismo político y la participación estatal de los movimientos sociales populares: juicio al paradigma normal de análisis. En: Massetti, A., Villanueva E. y Muñiz Terra, L. (comps.). Trabajo empleo, clasificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales. Buenos Aires: CLACSO.

_____ (2006) Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción colectiva desafiante en la Argentina 1989-2004. *Revista Argentina de Sociología*, Año 4, N°6.

Gómez, M. y Massetti, A. (2009) Los movimientos sociales dicen. Conversaciones con dirigentes piqueteros sobre el proyecto nacional y Latinoamericano. Buenos Aires: Nueva Trilce

Guglielmucci, A. (2011) El proceso social de consagración de la memoria sobre el terrorismo de Estado como política pública estatal de derechos humanos en Argentina. Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Buenos Aires. Disponible en: <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1705>

_____ (2011b) Compromiso y técnica en la configuración del campo laboral de los derechos humanos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. *Revista del Museo de Antropología*, 4(1), 261-272.

Heredia, M., Gené, M., y Perelmiter, L. (2012) Hacia una socio-historia del Gabinete Nacional. *Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política*. *Revista PolHis*. Año, 5, 284-319.

Jelin, E. (2017) La lucha por el pasado. Buenos Aires: Siglo XXI.

_____ (2007) Víctimas, familiares y ciudadanos/as: las luchas por la legitimidad de la palabra. *Cadernos pagu* (29), julho-dezembro de 2007. Pp. 37-60.

_____ (2003) La escala de acción de los movimientos sociales. En: Jelin, E. (Comp.) Más allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales (pp.25-60). Buenos Aires: Libros de Zorzal.

_____ (1995) La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en Argentina. En: Acuña (comps). Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina. Buenos Aires: Nueva visión. pp. 101-146.

_____ (1985) Los nuevos movimientos sociales. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.



Jelin, E. y Azcárate, P. (1991) Memoria y política: movimientos de Derechos Humanos y constitución democrática. *América Latina Hoy*, 1, pp. 29-38.

Kotler, R. I. (2013) Historia y memoria del movimiento de derechos humanos en Tucumán. Tesis de Doctorado USAL. Disponible en: <<https://bit.ly/3neDTEB>>

Leis, H. R. (1989) El movimiento por los derechos humanos y la política argentina. Buenos Aires: CEAL.

Longa, F. (2019) Historia del Movimiento Evita. Buenos Aires: Siglo XXI.

Manzano, V. (2004) Tradiciones asociativas, políticas estatales y modalidades de acción colectiva. Análisis de una organización piquetera. *Intersecciones en Antropología*, 5, pp. 153-166.

Messina, L. (2016) Reflexiones sobre la articulación Estado-sociedad civil en las políticas de la memoria en Argentina. *Revista Memória em Rede*, Vol. 8, No 15, p. 109-136, disponible en: <<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria/article/view/10129>>

_____ (2015) Políticas de la memoria y construcción de memoria social: acontecimientos, actores y marcas de lugar El caso del ex centro clandestino de detención "Olimpo". Tesis doctoral, Universidad Nacional de Buenos Aires. Disponible en: <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1647>

Montero, A. S. (2012) "¡Y al final un día volvimos!": los usos de la memoria en el discurso kirchnerista: 2003-2007. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Morales, V. (2012) Asociación Madres de Plaza de Mayo: kirchnerismo y resignificación. En: Barros, M., Daín, A. Y Morales, V. (eds.). *Escritos K*. Villa María: Eduvin.

Natalucci, A. (2010a) ¿Nueva gramática política? Reconsideraciones sobre la experiencia piquetera en la Argentina reciente. *Revista Astrolabio*. Nueva época, N°5.

_____ (2010b) Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales. La experiencia del Movimiento de Barrios de Pie, 2002-2008. *Laboratorio*, (23).

_____ (2008) De los barrios a la plaza. Desplazamientos en la trayectoria del Movimiento Evita En: S. Pereyra, G. Pérez y F. Schuster (Eds). *La Huella piquetera, Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*. La Plata: Al Margen.

Novaro, M. (2008) Derechos humanos y política democrática. En: Eiroa, P. y Otero, J. (comps.) *Memoria y Derecho Penal*. Buenos Aires: Fabian Di Placido Editor.

Oviedo, L. (2004) Una historia del movimiento piquetero. *Razón y revolución*, no 9.



Peller, M. (2013) Experiencias de la herencia. La militancia armada de los setenta en las voces de la generación de las hijas y los hijos. *Nudos en psicoanálisis*, no2, año II, nov. 2013, pp. 19-26.

_____ (2009) Memoria, historia y subjetividad. Notas sobre un film argentino contemporáneo. *Política y Cultura*, primavera 2009, no 31, pp. 49-63.

Perelmiter, L. (2012) Fronteras inestables y eficaces. El ingreso de organizaciones de desocupados a la burocracia asistencial del Estado. Argentina (2003-2008). *Estudios Sociológicos*, El Colegio de México, Mayo – agosto, 2012.

Pereyra, S. (2008) *¿La lucha es una sola?*. Buenos Aires, Los Polvorines-Univ. Nacional General Sarmiento, Buenos Aires-Biblioteca Nacional.

_____ (2005) *¿Cuál es el legado del movimiento de derechos humanos? El problema de la impunidad y los reclamos de justicia en los noventa*. En: Schuster, F. y otros (comps.) *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.

_____ (2001) Las protestas de derechos humanos en la Argentina de la consolidación democrática 1989-1998. In *Meeting of the Latin American Studies Association* (pp. 1-10).

Pereyra, S., Vommaro, G. y Pérez, G. (Eds.) (2013) *La Grieta. Política, economía y cultura después del 2001*. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Pérez, G. y Natalucci, A. (2010) La matriz movimentista de acción colectiva en Argentina:

La experiencia del espacio militante kirchnerista. *Revista América Latina Hoy*, vol. 54, Universidad de Salamanca.

_____ (Eds.) (2012) *Vamos las bandas: Organizaciones y militancia kirchnerista*. Buenos Aires: Nueva Trilce.

Retamozo, M. (2011) Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina. *Revista Polis [En línea]*, 28.

Retamozo, M., y Muñoz, M. A. (2013) Kirchnerismo y hegemonía. *Política y gobierno*. En *Peronismos, izquierdas y organizaciones populares*. La Plata (Argentina): EDULP.

Romero, L. A. (2012) *Breve Historia Contemporánea de la Argentina (1916-2010)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Sarlo, B. (2013) Errores y aciertos del kirchnerismo según Sarlo. En: Méndez Shiff, P., *Infonews*, 25 de mayo de 2013. Disponible en: <<https://bit.ly/3rZnRlx>>

_____ (2011) *La audacia y el cálculo: Kirchner 2003-2010*. Buenos Aires: Sudamericana.



Sikkink, K. (1996) The Emergence, Evolution, and Effectiveness of the Latin American Human Rights Network. En: Jelin, E. y Hershber, E. (Eds) Constructing Democracy: Human Rights, Citizenship, and Society in Latin America. Boulder: Westview Press.

Soprano, G. (2007) Del Estado en singular al Estado en plural : Contribución para una historia social de las agencias estatales en la Argentina. Cuestiones de Sociología, no4, 2007.

Surraco, L. (2013) Políticas públicas reparatorias dirigidas al universo de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y efectos de los prácticas sociales genocidas. -El caso de los hijos de desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en Argentina y el posicionamiento del Cdh-. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín. Disponible en: <<https://bit.ly/2JQEaA6>>

Svampa, M. (2018) Conferencia: Los movimientos sociales en las experiencias de gobierno: ¿Cooptación o alianzas para el cambio? (Mimeo), 8o Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 21 de noviembre.

_____ (2016) Reflexiones desde la tristeza. Diario Perfil Online, 7 de agosto de 2016, disponible en: <<https://bit.ly/3njcXDA>>

_____ (2008) Cambio de época. Poder político y movimientos sociales. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

_____ (2006) La Argentina: Movimientos Sociales e Izquierdas. Entre voces. Revista del grupo Democracia y Desarrollo Local N o 5, Quito. Disponible en: <<http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo11.pdf>>

Vázquez, M. (2015) Juventudes, políticas públicas y participación: un estudio de las producciones socioestatales de juventud en la Argentina reciente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Grupo Editor Universitario-CLACSO.

Vecchioli, V. (2013) Las Víctimas del Terrorismo de Estado y la gestión del pasado reciente en la Argentina. Papeles del CEIC, International Journal on Collective Identity Research, (1), 7.

_____ (2012) Repertorios militantes y expertise jurídica en la defensa de la causa de los Derechos Humanos en la Argentina: el caso de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ensemble. Revista electrónica de la Casa Argentina en París, 10.

_____ (2005) La nación como familia. Metáforas políticas en el movimiento argentino por los derechos humanos. Cultura y política en etnografías sobre la Argentina, 241-270.



Veiga, R. (1985) Las organizaciones de derechos humanos. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Vezzetti, H. (1998) Activismos de la memoria: el 'escrache'. Punto de Vista, No 62, Buenos Aires.

Vommaro, P. (2015) Juventudes y políticas en la Argentina y en América Latina. Tendencias, conflictos y desafíos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Grupo Editor Universitario-CLACSO.

Zibechi, R (2009) Gobiernos y movimientos. Entre la autonomía y las nuevas formas de dominación. Viento Sur, 100, pp. 247-254.

_____ (2003) Genealogía de la Revuelta. La Plata: Letra Libre. Disponible en: <https://www.lavaca.org/libros/genealogia-de-la-revuelta/>



A conduta do Estado e as formas de resistência: Pelo que você luta?

Gabriel Lima Simões¹

Resumo

Esse estudo traz à discussão o conceito de governamentalidade, identificando como este é usado pelo Estado para conduzir a população, independente do contexto sócio-político-econômico vigente. Esses mecanismos de controle buscam manter uma obediência à lógica de funcionamento do Estado, induzindo a população a à inércia diante da implantação de políticas que não correspondem às suas demandas. Entretanto, a partir de análises bibliográficas e de discussões sobre os conceitos de revolta, revolução e insurreição, este artigo analisa a conformação de movimentos de luta e resistência, pontuando que, apesar de não vivermos mais os tempos das revoluções, é possível construir articulações sociais a partir das micropolíticas que aproximam diferentes segmentos da população. Dessas articulações podem nascer movimentos de insurreição que questionem a centralidade do poder no Estado e provoquem fraturas nas práticas e nos discursos dos saberes instituídos. Coloca-se ainda em análise o fato de alguns desses movimentos sociais terem como prática ações de controle da sociedade que se aproximam da lógica do modelo do Estado vigente, mantendo a prática da conduta pastoral e disciplinar sem modificar o papel de indivíduo como assujeitado. Como conclusão, observa-se que, em tempos de dificuldade para lutas articulares, é preciso que haja ainda mais resistência e articulações 'de baixo-para-cima', interrompendo em ações que possibilitem maior autonomia e afastem a lógica individualizadora que o Estado costuma impor por subjetivação.

Palavras chave

Governamentalidade; Estado; Movimentos; Resistência; Insurreição.

Introdução

As técnicas de governamentalidade passam por constantes remodelações ao longo dos anos de modo a aprimorar suas estratégias para controle um controle cada vez mais eficaz da vida da população. Acompanhando as políticas instituídas pelo Estado, a sociedade foi construindo seus modos de subjetivação e construindo valores e costumes que, por vezes, tendem a reproduzir uma cultura de preconceitos e segregações.



Sendo o funcionamento da vida, sobretudo da vida em comunidade, regido por políticas em seus níveis macro e micropolítico, a sociedade vai tecendo códigos de conduta, acordos, crenças, valores e relações que terminam por moldar seu cotidiano, tanto no âmbito coletivo quanto no individual.

Historicamente se difundiu a crença de que, para a preservação das suas vidas, as pessoas precisam escolher uma espécie de líder a quem possam confiar sua proteção. Caberia então ao soberano comandar certo território e proteger seus súditos dos perigos que lhes rondassem. Foucault (2016, p. 203) aponta que quando os indivíduos se reúnem para constituir um soberano, para delegar a uma pessoa específica o poder absoluto sobre eles, geralmente o fazem porque estão premidos pelo perigo ou acometidos por necessidades.

Todavia, se percebe que a vida dessas pessoas torna-se vulnerável diante dos interesses do soberano uma vez que é próprio da soberania traçar estratégias para preservação do seu principado e para conduzir a sociedade a partir de suas leis. Assim, ao longo do tempo foi-se experimentando diferentes formas de governo para trabalhar a disposição das coisas e táticas de modo que as finalidades fossem cumpridas, sobretudo a partir de técnicas de controle disciplinares. Contudo, Foucault (2008a) enfatiza que essas duas técnicas não são excludentes. Segundo ele,

As coisas não devem de forma nenhuma ser compreendidas como substituição de uma sociedade de soberania por uma sociedade de disciplina e mais tarde de uma sociedade de disciplina por uma sociedade de governo. Temos de fato um triângulo soberania, disciplina e gestão governamental. (Foucault, 2008a, p. 142).

A arte de governar vai se moldando a essa nova dinâmica social, com uma perspectiva mais coletiva. Entretanto, como destaca Foucault (2008a), o modelo de Estado que vai se configurando trata de garantir também as suas estratégias para a manutenção dos velhos interesses. Nas palavras do Foucault, “a arte de governar ainda tem o mesmo objetivo das leis de Platão, isto é, evitar a revolução, manter o Estado, um só Estado, num estado permanente de perfeição” (Foucault, 2008a, p. 388).

Está estabelecido, portanto, um paralelo entre uma tecnologia que visa um monitoramento individual e outra tecnologia que prima pela segurança do conjunto em relação aos seus perigos internos (Foucault, 2016, p. 209). Entretanto, qual a origem e definição desses tais perigos internos? Até que ponto essas sensações de perigo e



necessidades de proteção que acometem à população não representam efeitos produzidos pelo próprio jogo biopolítico?

Esse jogo de interesses relatado por Foucault aponta que, nos distintos cenários, a arte de governar foi se aprimorando de modo que sempre se tivesse uma estratégia de condução da população independente do contexto sócio-político-econômico vigente. A partir de tal entendimento Foucault apresenta o conceito de governamentalidade:

Por governamentalidade entendo o conjunto de procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e a técnicas que permitem exercer essa forma específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. (Foucault, 2008b, p. 143).

Foucault (2008b, p. 6) já enfatizava que o sentido da governamentalidade, segundo o princípio da razão de estado, é fazer que o Estado possa se tornar sólido e permanente, que possa se tornar rico, que possa se tornar forte diante de tudo o que pode destruí-lo. Sendo um projeto de poder, é esperado que ele trace mecanismos para retroalimentar seu direito de, como estado, intervir nas condições a vida da população, multiplicá-la e torná-la isenta de todo tipo de acidentes, eventualidades e deficiências. Isso, claro, quando essas vidas significarem alguma espécie de retorno à manutenção do equilíbrio e do poder desse Estado.

Em paralelo ao controle por parte do Estado, diversas outras instituições também atuam na perspectiva de controle e disciplinarização: igrejas, escolas, família, casamento, dinheiro, organizações sociais, etc. A sociedade está habituada a criar dispositivos que trabalham sob mecanismos normatizadores, produzindo padrões e necessidades a serem seguidos, segregando a população entre aqueles que se enquadram nas normas e aqueles rebeldes eu precisam ser podados, controlados, enquadrados, assujeitados ou mesmo eliminados.

Dados os distintos contextos que caracterizam os diversos povos; dadas as intenções e as ações desenvolvidas (sobretudo ações construídas de forma compartilhada); dadas as múltiplas subjetividades que afetam a cada um de forma diferente; podem-se construir dobras que permitam desviar-se do eixo estatocêntrico, mesmo que esse Estado continue exercendo seu poder centrípeto.



Tais dobras possibilitam novos modos de subjetivação que impulsionam experiências libertárias e sensação de maior autonomia. Mas na prática, estamos todos dentro deste Estado e, de algum modo, submissos à sua lógica de conduta.

Considerando que determinadas parcelas da população são atravessadas pelas mesmas subjetividades, essas similaridades cotidianas podem conduzir essas pessoas a constituírem agrupamentos por lutas comuns. A partir da ideia de coletividade, tais articulações podem servir de dispositivos para fazer ecoar uma resposta da sociedade à prática da governamentalidade normalizante.

Mas o que é preciso fazer para que, mesmo fazendo parte de um Estado, não estacionemos nem aceitemos ser conduzidos por normas e regulamentos que, muitas vezes, não correspondem às nossas demandas, nossos valores e crenças? Como essa população pode hesitar à potência dessa relação de poder como campo de força que normaliza? Como sair do estado de inércia?

Essas inquietações levam a um questionamento que se torna eixo central para pensar a resistência: como articular movimentos de luta que tenham força para questionar a centralidade do poder no Estado e provocar fraturas nas práticas e nos discursos dos saberes instituídos?

Precisa-se ter um estado como centro?

Em uma das suas aulas no Collège de France Foucault lança um questionamento à sua turma: Será que afinal de contas não se pode prescindir do Estado? Por que os homens seriam abrigados a obedecer a um governo que não lhes propõe nenhuma finalidade, pessoal e exterior ao Estado? (Foucault, 2008a, p. 345).

Foucault traduz Estado como sendo uma prática. Para ele, o Estado não pode ser dissociado do conjunto das práticas que fizeram efetivamente que ele se tornasse uma maneira de governar, uma maneira de agir, uma maneira também de se relacionar com o governo. (Foucault, 2008a, p. 369). As práticas de governamentalização apontam que, ao longo da história, foi-se solidificando uma força que dava legitimidade ao fato de um governo poder intervir na vida da população, direcionando seu comportamento para cumprimento de supostas verdades. Mas o que sustenta a obediência dessa população a tais mecanismos de controle e disciplinarização?

A constituição do Estado como uma referência central para controle da vida implica na estruturação de uma sociedade formada pelo agrupamento das pessoas que,



pertencentes ao Estado, estarão sob a guarda, o comando e a suposta proteção deste. Foucault (2008a, p. 470) diz que a sociedade, como campo específico de naturalidade própria do homem, vai fazer surgir como vis-à-vis do Estado o que se chamará de sociedade civil. Ele faz questão de ressaltar que a sociedade civil não pode ser pensada como um produto ou resultado do Estado. Porém, o Estado tem a seu encargo uma sociedade civil, e é a gestão dessa sociedade civil que o Estado deve assegurar. Foucault ainda complementa afirmando que a sociedade civil é o que o pensamento governamental e as novas formas de governamentalidade nascidas no século XVIII fazem surgir como correlativo necessário do Estado (Foucault, 2008a, p. 470).

Somos todos então, Estado?

Não há o 'lado de fora'?

Não. Não tem quem não faça parte desta conjuntura. Quiçá, com esforço, consegue-se estabelecer algumas dobras, algumas experiências mais autônomas, mas sempre rodeadas pelos olhares normalizantes e controladores do Estado.

Há quem acredite que a prática de coerção por parte do Estado só teria um fim na hipótese de absorção do Estado pela sociedade civil. Tal ideário promoveria uma conversão do Estado numa espécie de sociedade civil articulada. Contudo, desde que o Estado é Estado ele tenta se proteger e construir barreiras que inviabilizem quaisquer oportunidades de a população buscar um 'lado de fora'.

Como dispositivo para se proteger, o Estado institui dispositivos que promovem na população uma sensação de liberdade. Como afirma Foucault (2008a, p. 475), a liberdade se tornou um elemento indispensável à própria governamentalidade. Agora só se pode governar bem se, efetivamente, a liberdade ou certo número de formas de liberdade forem respeitados.

Não respeitar a liberdade é não apenas exercer abusos de direito em relação à lei, mas é principalmente não saber governar como se deve. A integração das liberdades e dos limites próprios a essa liberdade no interior do campo da prática governamental tornou-se agora um imperativo (Foucault, 2008a, p. 475).

Diante de tantos mecanismos de regulação e manutenção do controle por parte do Estado, qual seria então o caminho para uma vida mais próxima do 'fora', frente à força de atração do Estado?



Foucault aponta a clandestinidade como uma das dimensões possíveis e necessárias de ação política. Segundo ele, esse seria um caminho que oferece a possibilidade de alternativa à conduta governamental, passando a estarem sob outras formas de conduta, outros líderes, outras formas de obediência específicas, etc. (Foucault, 2008a, p. 262).

Dentre essas vias que proporcionam sensações de liberdade, é possível fazer uma correlação, por exemplo, com o crescimento exponencial das igrejas e a proliferação de diferentes religiões, as últimas décadas. Mesmo ainda estando submetidos à conduta do Estado, criam-se novas bolhas que instituem outras normas de conduta paralela.

Mas ser conduzido por outras forças para além do Estado representa mais liberdade ou novos aprisionamentos?

A mudança que nasce da revolta

Como defende o Comitê Invisível (2016, p. 91), é preciso abandonar a ideia de que se faz revolução em nome de algo. Não há uma entidade essencialmente justa e inocente, que as forças revolucionárias seriam incumbidas de representar.

Cabe aqui destacar a distinção entre o propósito e a dimensão desses movimentos. Uma revolução se dá com o propósito de criar uma nova ordem. Faz-se revolução por algum objetivo de mudança definido. Uma revolução acontece pela mobilização de revolucionários. Numa outra perspectiva, pessoas revoltadas se mobilizam para fazer uma insurreição. Insurreições se dão contra algo que está instituído.

Guattari e Rolnik (1996, p. 185) salientam que a ideia de revolução se identifica com a ideia de processo. Produzir algo que não exista, produzir uma singularidade na própria existência das coisas, dos pensamentos, das sensibilidades. Contudo os autores defendem que para que haja uma transformação revolucionária, faz-se necessária uma revolução cultural nas pessoas, uma revolução molecular, de modo que não se caia numa reprodução da sociedade anterior:

É o conjunto das possibilidades de práticas específicas de mudança do modo de vida, com seu potencial criador, que constitui o que chamo de revolução molecular, condição, a meu ver, para qualquer transformação social. E isso não tem nada de utópico ou realista. (Guattari; Rolnik, 1996, p. 186-187).

Como movimentos de contraconduta, a insurreição luta contra procedimentos postos em funcionamento para conduzir os outros. Como apontado por Sardinha (2018), insurreição é uma espécie de acontecimento que visa perturbar uma dada ordem



provocando uma fratura nas práticas e nos discursos dos saberes instituídos, propondo uma polifonia.

Como insurgência, é preciso lutar em prol de mudanças concretas. De outros modos. Mesmo que não exista uma possibilidade de autonomia total em relação ao controle estatal, por exemplo, há outras vias para quem não se entrega à inércia e aceitação das formas como os mecanismos de controle atuam. Todos nós estamos dentro desse contexto regulatório. Uns mais afetados que outros. Outros mais dependentes que uns. Mas muitas dobras são possíveis para se aproximar do fora. Como se rebelar? Se revoltar? Se insurgir?

Mudanças podem insurgir da mobilização de pessoas que são de algum modo atravessados por uma inquietação, porém, não prescinde que estas estejam filiadas a uma mesma organização. O Comitê Invisível (2016, p. 18) afirma que se organizar é agir segundo uma percepção comum, em qualquer nível que seja. Eles dizem ainda que “o que nos falta é uma percepção partilhada da situação. Sem essa ligatura, os gestos se apagam no nada e sem deixar vestígios, as vidas têm a textura dos sonhos, e os levantes terminam nos livros escolares” (Comitê Invisível, 2016, p. 18).

Foucault salienta a possibilidade de mobilizações e revoltas articuladas inclusive por pessoas que possuem interesses distintos, mas que comungam de um mesmo descontentamento:

Há causas ocasionais de sedição quando se leva ao nível de um descontentamento consciente certo número de elementos que tinham permanecido de certo modo dissociados e indiferentes, quando se produz o mesmo tipo de descontentamento em pessoas diferentes, levando-os a se unirem, apesar da divergência dos seus interesses. (Foucault, 2008a, p. 359)

O grande movimento que marcou o Brasil em junho de 2013 foi um exemplo dessa junção de lutas por bandeiras distintas. Tendo como ponto de partida a indignação de moradores de São Paulo com o anúncio, pela prefeitura da cidade, de um reajuste de 20 centavos na tarifa de transporte público, deu-se início uma articulação pelas redes sociais que culminou em diversos protestos urbanos tomando as ruas das principais cidades do país.

Um primeiro protesto presencial ocorreu no dia 6 de junho, mobilizado por jovens vinculados ao ‘*Movimento Passe Livre*’, reuniu cerca de dois mil na cidade de São Paulo. A partir daí, os motivos que levavam às reivindicações foram ampliados e, adotando o



slogan “não é apenas por 0,20 centavos”, passou-se a gritar também pelo fim da corrupção, por melhorias nas áreas de saúde e educação, por transparência nos investimentos para a copa do mundo, pelo fim do monopólio da comunicação, dentre outras causas.

Alguns anos depois novas manifestações foram articuladas, porém com uma perspectiva diferente. Às voltas de eleições presidenciais e processo de impeachment, as mobilizações de rua foram contaminadas pela partidarização e pelo jogo político e se tornou segregada. A tarifa do transporte público já sofreu novos aumentos, a corrupção continua a todo vapor, os investimentos públicos em saúde e educação têm sofrido ataques, etc.

Como defende Foucault, no momento em que há contracondutas, as pessoas implicadas estão buscando por mudanças. Contudo, mesmo que essas mudanças não sejam alcançadas, mesmo que essas pessoas voltem a ser conduzidos pela mesma ou por outra lógica, o acontecimento vivido já representa uma referência de que é possível insurgir.

Os movimentos populares que se propõem a uma revolução muitas vezes são articulados nas bases e avançam na tentativa de quebrar a lógica governamental de estruturação política e social. Pelo menos em teoria. Foucault (2008a, p. 477) aponta que as contracondutas que vemos se desenvolverem têm correlação com a governamentalidade moderna, que, desde meados do século XVIII, têm como objeto os mesmos elementos dessa governamentalidade.

Portanto, como reafirmado por Foucault (2008a, p. 397), o verdadeiro problema dessa nova racionalidade governamental não é somente a conservação do Estado numa ordem geral, mas a conservação de uma certa relação de forças, a conservação, a manutenção ou o desenvolvimento de uma dinâmica das forças.

O Comitê Invisível (2016, p. 45) salienta que a reação que se costuma adotar parte de uma posição de lamentação, de denúncia e, portanto, de impotência. Eles defendem que o estado de exceção em que vivemos não deve ser denunciado, deve ser virado contra o próprio poder.

Segundo Sardinha (2018), já não vivemos mais o tempo das revoluções, em que se almejavam grandes mudanças, a partir da emancipação de uma classe. Em tempos de insurreição as lutas têm partido de baixo, como motins, como ferramentas em busca de irrupções à lógica das coisas. Nessa perspectiva, o Comitê Invisível (2016, p. 51) afirma



ainda que não é o “povo” que produz o levante, mas o levante que produz seu povo suscitando experiências e a inteligência comuns. Eles ainda complementam:

O que aqui se constrói não é nem a “sociedade nova” em seu estágio embrionário, nem a organização que finalmente derrubará o poder para construir um novo, é antes a potência coletiva que, por via da sua consistência e da sua inteligência, condena o poder à impotência, frustrando, uma a uma, todas as suas manobras. (Comité Invisível, 2016, p 53).

Deleuze (1990, p. 1) propõe que, portanto, não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas. Mas quais vias são possíveis? Foucault (2008a, p. 260) já se perguntara: por quem aceitamos ser conduzidos? Como queremos ser conduzidos? Em direção ao que queremos ser conduzidos? São observações sobre a especificidade não autônoma dessas resistências, dessas revoltas de conduta.

O próprio Foucault, que não era muito de dar respostas às suas perguntas, chegou a apontar a clandestinidade como uma das dimensões necessárias dessa ação política. Segundo ele, esse seria um caminho que oferece essa possibilidade de alternativa à conduta governamental sob outras formas de conduta, outros líderes, outras formas de obediência específicas, etc. (Foucault, 2008a, p. 262).

Mas de que modo as subjetividades nos mobiliza ou imobiliza? Como a indignação pode fazer brotar a resistência ou explodir numa insurreição?

Nossa luta é apesar do governo ou devida a ele?

A resistência como condição de vida

Foucault trabalhava com o conceito de parresia para referir-se a casos em que o indivíduo é tomado por um sentimento de insatisfação e sente a necessidade de se expressar de forma franca. O parresiasta é, portanto, aquele tem a coragem e a liberdade de dizer a verdade, mesmo diante dos riscos.

Mas alguém ouve o grito que vem do povo pobre? Gritar pra quem, se aquele que se subjetiva como responsável por fazer-lhes viver é justamente quem está promovendo sua morte? Como uma vítima da violência – seja ela física, psicológica, de gênero, de raça, etc. – vai buscar algum tipo de proteção ou reparação junto a uma representação do Estado sendo que o violador é parte do próprio Estado?

Diante dessa prática de extermínio do povo pobre, instaurada e alimentada pelo Estado e diante de tantos mecanismos de regulação e controle sobre vida e morte da



população, de onde moradores de favelas podem tirar forças para resistir à máquina repressora do Estado?

Essa prática biopolítica de incitar naturalizações e desejos faz parte do jogo das relações de poder que Foucault aborda em várias das suas obras. O autor sustenta que as relações de poder convocam a cada instante à resistência. Contudo, salienta que é a possibilidade de resistência que incita a manutenção do poder daquele que domina. A busca por essa manutenção será mais forte e com mais astúcia, quanto maior for a resistência (Foucault, 2006, p. 407).

Em *Vigiar e punir*, Foucault traz a discussão sobre resistência ao afirmar que é próprio das disciplinas a busca por táticas de poder que inibam ao máximo o desejo de resistência. Segundo o autor, assim, o exercício do poder se torna menos custoso, tanto do ponto de vista político como econômico (Foucault, 2014, p. 220). Ele complementa afirmando que cabe à disciplina neutralizar os efeitos de 'contra-poder' que formam resistência ao poder, como agitações, revoltas, organizações espontâneas, coalizões.

Na mesma perspectiva, no livro *A história da sexualidade*, Foucault (1999, p. 337) afirma que onde há poder, há sempre resistência, sendo um coextensivo ao outro. A resistência, portanto, seria um elemento chave das relações de poder. Foucault aponta ainda que:

As relações de poder podem existir em função de uma multiplicidade de pontos de resistência: estes desempenham, nas relações de poder, o papel de adversário, de alvo, de apoio, de saliência onde se agarrar. Esses pontos de resistência estão presentes em toda parte na rede do poder. (Foucault, 1999, p.338).

De modo a conter as possibilidades de resistência do povo, o Estado está sempre intensificando suas estratégias para manutenção dos pobres como margem de sustentação ao sistema de proteção das vidas de outra parte da população. Nessa relação de poder tem sido constante o uso da força para reafirmar a discriminação, a segregação social e a eliminação daqueles que são considerados como ameaças.

Frente a essas práticas de racismo de Estado, como reagir?

Quando Fanon retratou o fenômeno da violência nas colônias, ele mostrou que a situação de instabilidade e o medo deixavam os colonizados debilitados. Assim, cada movimento desconhecido deixava-os com os nervos à flor da pele e tornava-se um motivo para 'colocar o dedo no gatilho' (FANON, 2005, p. 64).



É preciso reagir para manter-se vivo. Resistir é um ato de sobrevivência, necessário e possível. Como afirmam Granese, Molas e Rey (2017, p. 76), ainda que seja sob a mesma lógica daquilo que se resiste, a resistência é necessária porque ela diversifica, multiplica os discursos e as ações possíveis para preservação da vida.

Contudo, o Comitê Invisível (2016, p. 45) salienta que a reação que se costuma adotar parte de uma posição de lamentação, de denúncia e, portanto, de impotência. Eles defendem que o Estado de exceção em que vivemos não deve ser denunciado, deve ser virado contra o próprio poder. Porém, não é o povo que produz o levante, mas o levante que produz seu povo suscitando experiências e a inteligência comuns. Eles ainda complementam:

O que aqui se constrói não é nem a “sociedade nova” em seu estágio embrionário, nem a organização que finalmente derrubará o poder para construir um novo, é antes a potência coletiva que, por via da sua consistência e da sua inteligência, condena o poder à impotência, frustrando, uma a uma, todas as suas manobras. (Comitê Invisível, 2016, p 53).

O próprio Foucault, que não era muito de dar respostas às suas perguntas, chegou a apontar a clandestinidade como uma das dimensões necessárias dessa ação política. Segundo ele, esse seria um caminho que oferece essa possibilidade de alternativa à conduta governamental sob outras formas de conduta, outros líderes, outras formas de obediência específicas, etc. (Foucault, 2008a, p. 262).

Diante desses mecanismos de controle, Deleuze (1990, p. 1) propõe que não cabe mais temer ou esperar, mas buscar novas armas. Mas quais vias são possíveis? Foucault (2008a, p. 260) já se perguntara: por quem aceitamos ser conduzidos? Como queremos ser conduzidos? Em direção ao que queremos ser conduzidos? São observações sobre a especificidade não autônoma dessas resistências, dessas revoltas de conduta.

Conclusões

Genealogicamente, são muitas as marcas que vão construindo o cotidiano da população, produzindo subjetividades, determinando o que é normal à sua época e o que é intolerável a ponto de lhes dar força para revoltar-se. Porém, a quebra do estado de inércia prescinde de uma iniciativa mais que individual, é preciso construir alianças, parcerias, movimentos de luta comum.

Para além da dicotomia entre classes sociais, existem múltiplos focos de luta, especialmente considerando as diferentes necessidades da população e seus grupos.



O modo como as subjetividades afetam as pessoas de formas distintas pode estimular movimentos de insurreição com diferentes propósitos.

Pensando em questões micropolíticas, as afetações tendem a aproximar pessoas para conquista de um objetivo comum. Essas aproximações podem se concentrar numa classe social específica ou podem ser marcadas por um histórico conflito entre classes. Porém, podem ainda envolver questões que atravessam diferentes classes e que vão colocar no mesmo lado da luta, por exemplo, uma mulher que é empregada doméstica e a sua patroa também mulher; um trabalhador negro do comércio e seu empregador também negro, dentre tantas outras possibilidades de lutas por micropolíticas que se sobrepõem à divisão social por classes.

Diante de um modelo de Estado autoritário e de tantas outras forças e instituições que também exercem poder sobre a população lhe impondo a condição de assujeitamento, torna-se cada dia mais urgente a busca por articulações que unam as pessoas em nome da resistência. Só um movimento 'de baixo para cima', de base popular, pode congregiar forças para romper as lógicas colonialistas de dominação e permitir a conquista de uma maior autonomia, afastando a lógica individualizadora que o Estado costuma impor por subjetivação.

Referências

Comitê Invisível. *Aos nossos amigos: Crise e insurreição*. 1 ed. São Paulo: N-1 edições, 2016.

Deleuze, G.. Post-Scriptum sobre as Sociedades de Controle. In: *L'Autre Journal*, nº 1, maio de 1990

Fanon, F. *Os condenados da terra*. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2005.

Foucault, M. (1999). *História da Sexualidade - A Vontade de saber*. Rio de Janeiro; Graal.

Foucault, M. (2006). *Ditos e escritos*. Problematização do sujeito: psicologia, psiquiatria e psicanálise. Motta, Manoel Barros da (Org.). Tradução de Vera Lúcia Avelar Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, v. 1.

Foucault, M. (2008a). *Nascimento da Biopolítica*. Trad. Eduardo Brandão. SP: Martins Fontes. (Coleção tópicos)

Foucault, M. (2008b) *Segurança, território, população*. Curso dado no Collège de France (1977- 1978). Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes.

Foucault, M. (2014) *Vigiar e punir*. Trad. Raquel Ramallete. 42 ed: Petrópolis: Vozes.



Foucault, M. (2016) *Em defesa da sociedade*. Curso dado no Collège de France (1974–1975). São Paulo, 2ª ed., 2ª tiragem: Martins Fontes.

Granese, A., Molas, A., REY, & J. Práticas Políticas e Acontecimento. *Ayvu: Revista de Psicologia*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 57-79, july 2017. ISSN 2446-6085. Disponível em: <<http://periodicos.uff.br/ayvu/article/view/22218>>. Acesso em: 31 de jul de 2019.

Guattari, F., & Rolnik, S. *Micropolítica: cartografias do desejo*. Rio de Janeiro: Vozes. 4ª edição, 1996.

Sardinha, D. *Michel Foucault e as insurreições*. Curso ministrado no SESC Florianópolis nos dias 02-03 de outubro de 2018.



Línea Temática 4.

**Violencia política y criminalización
de la protesta social en América Latina**



La deuda social en México. El desafío de conformar una Comisi.

Valeria Fernanda Falletti

Resumen

El presente artículo pretende trabajar la problemática de las víctimas ante el desafío de conformar una Comisión de la Verdad en el país. En este sentido, fue importante rastrear otras experiencias de conformación de comisiones de este tipo en otros países de la región. Asimismo, al aproximarnos a esta temática nos resultó indispensable reflexionar sobre la memoria colectiva y el lugar de los testimonios en la construcción de la memoria. Tanto la memoria como los testimonios se vuelven nodales en la promoción y el desarrollo de un proceso de justicia. También hemos pensado sobre el valor precario de la vida y sobre los modos singulares de su administración. En este trabajo hemos articulado las distintas nociones para señalar la deuda social que se tiene con las víctimas y con la sociedad en su conjunto, en la medida en que no se esclarezcan los hechos y no se promuevan procesos de justicia.

Palabras clave

Organizaciones civiles de víctimas; Testimonio; Poder de desaparición; Procesos de Justicia.

Abstract

In this article, we explore the problems and challenges faced by victims in the process of creating a "Truth Commission" in Mexico. In the first place, it was important to identify similar experiences in other Latin American countries. Moreover, it was necessary to reflect on the concept of collective memory and the role played by testimonies in the construction of that memory. This is the case because memory and testimonies are essential for processes aimed to promote justice. We also reflect on the precarious value of life and on the singular ways in which it is administered. Along the article, we articulate different concepts in order to underscore the debt contracted with victims and the society as a whole when crimes are not investigated and justice is not promoted.

Keywords

Civil organizations of victims; Testimony; Power of disappearance; Justice processes.



Introducción

El presente artículo pretende realizar una reflexión sobre el proceso de conformación de una Comisión de la Verdad en México. Entre las propuestas desarrolladas por Andrés Manuel López Obrador durante la última campaña presidencial, dos de ellas han tomado cierta relevancia, aquellas relativas a la temática de la seguridad y a impulsar un proceso de justicia. Sin embargo, en el seguimiento de los primeros 100 días de gobierno no se han observado avances significativos en este sentido, aunque sí se ha impulsado la conformación de una Guardia Nacional Civil. El presidente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas después de conseguir el porcentaje necesario en el poder legislativo para que se promulgara esta Ley, comenta que: "... con la Guardia Nacional se va a solucionar la problemática de las desapariciones en México" (MVS noticias, 4 de marzo). Dicha declaración muestra, hasta el momento, una voluntad política que se compromete con procesos que ocurrirán en un futuro, quedando pendiente la necesaria revisión de sucesos pasados que implicaron las desapariciones de personas, entre otras violaciones a los derechos humanos.

El presente artículo se propone, en primer lugar, dar cuenta de modo breve sobre experiencias de la conformación de Comisiones de la Verdad en otros países de la región, en otros contextos históricos y políticos. En una primera aproximación al tema es posible señalar que existen ciertas singularidades en los casos citados, a partir de las cuales se pueden establecer diferencias con México. En primer lugar, en el caso mexicano no existen perpetradores únicos y claros quienes puedan ser señalados como responsables de la desaparición, por otro lado, existe una complejidad de los casos de desapariciones por momentos difíciles de discernir y finalmente, no es posible establecer etapas definidas como podría suceder, por ejemplo, con el establecimiento de un Acuerdo de Paz en 1996 en Guatemala, ni tampoco con la llegada de la democracia como ocurrió en 1983 en Argentina. A pesar de que en el actual gobierno se proclama por la Cuarta Transformación, las actuales inercias institucionales por momentos no dejan ver con claridad lo sustantivo del cambio.

En cuanto a los procesos de violencia que aún hoy continúan y no se observa el cierre de un período, un académico estudioso de Derechos Humanos del Instituto de Jurídicas de la UNAM, Daniel Vázquez (entrevista 1 realizada el 20 de febrero de 2019) nos comenta:



“... lo cierto es que el problema que tenemos en México es que estamos en un momento transicional donde hay aún altos grados de violencia. Entonces, bajo un alto grado de violencia y en un país con una propuesta de militarización, ninguna víctima ni ningún sicario van a querer dejar las armas y hablar directamente sobre lo que sucedió en el pasado, porque en realidad el pasado es el presente.... No es algo que se acabó y terminó...”.

Asimismo, y sobre la complejidad de poder establecer responsables de las violaciones a los derechos humanos, el mismo entrevistado comenta:

“Entiendo las complejidades específicas del caso mexicano, el caso mexicano se parece más al colombiano, es más cercano.... Y digo al caso colombiano, hasta cierto punto, porque en ese caso te podías sentar a platicar con los líderes paramilitares en el 2007 como sucedió, es distinto.... Y acá ¿a quién llamas?! ¿Al grupo Jalisco? ¿Al Nueva Generación? ¿Al Cartel de Sinaloa?, ¿a los Zetas...?!? Además de que hacer una mesa de negociación con los cárteles es un suicidio político”.

Jacobo Dayan, otro entrevistado, explica que cree que no existen las condiciones de seguridad en el país para poder implementar una Comisión de la Verdad.

La importancia de tejer memoria y testimonio.

El proceso de construcción de la memoria es esencial en procesos de justicia y del restablecimiento del tejido social. Al considerar el lema que usualmente se menciona y proclama en estos procesos, “Verdad, justicia y reparación”, la verdad es el elemento fundamental para impulsar un proceso de justicia, es decir, saber y conocer sobre lo que realmente sucedió, en otras palabras, “darles verdad a las víctimas” (Entrevistado 1). Este mismo entrevistado continúa:

“La propuesta de Justicia Transicional incluía una Comisión Nacional de la Verdad, un Mecanismo en contra de la Impunidad, un Mecanismo de Reparación Integral y un Mecanismo de Protección a testigos y a víctimas. Pues si no tienes un Mecanismo de Protección a Testigos y Víctimas, no se van a animar a hablar y si no se animan a hablar, no tienes insumos para la Comisión de la Verdad ni para el Mecanismo en contra de la Impunidad... y así no les das verdad a las víctimas”.

Son distintas las acepciones sobre la memoria, las cuales se van definiendo conjuntamente con el valor del testimonio. Sin embargo, una definición central es la de pensar estos procesos a partir de la memoria colectiva. Es decir, se trata de un ejercicio colectivo y compartido, no meramente individual. La característica colectiva de estos procesos resulta fundamental para poder pensar en la posibilidad de justicia y mucho



más importante si se quiere indagar la opción de la reparación. En este sentido, las autoras chilenas Castillo, Díaz y Gómez (2014: 24) explican:

Para superar la condición de víctimas se hace cada vez más necesario elaborar la experiencia de los sujetos. Sin embargo, dicha elaboración es individualmente imposible si no se produce una elaboración política en la propia sociedad, que permita restablecer concreta y simbólicamente la existencia de la realidad pasada, confirmándola como un hecho sucedido efectivamente.

En esta misma línea, Halbwachs plantea que solo podemos recordar cuando es posible recuperar la posición de los acontecimientos pasados en los marcos de las memorias colectivas. Es decir, los recuerdos personales están inmersos en narrativas colectivas (Halbwachs, 2004). Asimismo el olvido se explica por la desaparición de estos marcos o por parte de ellos. Es decir, no es posible pensar en la memoria y en los recuerdos sin pensar en el olvido (Ricoeur, 2008).

Al pensar a la memoria conjuntamente con el valor y la cualidad del testimonio, existen algunas definiciones que se vuelven más trascendentes que otras. Por ejemplo, plantear que la memoria es sensorial, es decir, se relaciona con aquel recuerdo que se fija a partir de la experiencia de los sentidos como “el olor a sangre” o bien “sentir el frío de la celda” (Villa Avedaño, 2018). Asimismo es posible aludir a las lagunas en los recuerdos y a los bloqueos. “Este bloqueo implica un recurso extremo que permite desconectar los recuerdos traumáticos para poder continuar la vida, y en ocasiones se transfigura en otras expresiones como dolores corporales y enfermedades” (Villa Avedaño, 2018: 48). Estos bloqueos se relacionan con el derecho al olvido, pues se olvida para sobrevivir y seguir adelante. Sin embargo, este bloqueo no se relaciona con el silencio decidido que se utiliza en función de preservar a alguien o a algo (Jelin, 2001). Además para que los individuos puedan recuperar la “normalidad” deben también reconstruir su identidad y privacidad, de tal manera, los silencios en las narrativas de las víctimas pueden ser maneras de construir la realidad (Hietanen, 2014: 85). Algunas veces los recuerdos son parciales y se enfocan en ciertos detalles, y otros aspectos se pasan por alto. Estas diferentes aproximaciones a la memoria con sus lagunas y bloqueos adquieren especial relevancia en los contextos de violencia (Soriano Hernández, 2018) y en situaciones de tortura.

Al pensar la complejidad de las desapariciones, dentro de las “narrativas del sentido” se generan diversas estrategias para devolver sentido a esos cuerpos y recomponer las cadenas que los unían a sus nombres, territorios e historias. Es decir, esos esfuerzos



por reponer lo perdido, son en realidad relatos producto de un proceso de memoria y como tales, la creación de un presente recordado vinculado a la necesidad de acción. Toda escena que se rememora es en verdad una “reconstrucción imaginada” (Ohanian, 2014: 107).

Además, existen disputas entre las narrativas construidas según los grupos sociales y políticos de que se trate. Las explicaciones y argumentos que se van esgrimiendo y realizando serán diferentes si son contados por los militares, por los paramilitares, o bien por los familiares de víctimas de desaparición. En el ámbito público existe una disputa por las narrativas que van conformando los relatos de la historia del país en cuestión. No sólo son diferentes las narrativas sino que también la dimensión del dolor que atraviesan estos relatos.

Son varias las reflexiones acerca del duelo, discusiones que se observan sobre todo en el campo del psicoanálisis, y en las producciones recientes es posible observar desarrollos en la antropología social sobre el cuerpo del dolor, el cuerpo que sufre. Por su parte, María Inés García Canal (2014) se pregunta si es posible llevar adelante un proceso de duelo en un contexto social en el que las muertes forman parte de lo cotidiano, y plantea que en estos contextos el duelo es imposible. Sin embargo, la misma autora sostiene que en caso de que sí sea posible el duelo, éste adquiere una nueva dimensión social, ya que se constituye en acto político de resistencia para no repetir. Se trata de un particular uso del recuerdo para combatir el olvido sostenido en la exigencia de que los crímenes no queden sin castigo (2014:30) Continúa “... todos los crímenes en América latina y especialmente los que se ensañan en esos cuerpos vulnerables en extremo (...) que el trabajo de duelo cobije esas vidas no lloradas, única posibilidad de vencer a la melancolía y la depresión” (García Canal, 2014: 31).

Es decir, los trabajos que se puedan generar con la memoria y el testimonio propician ciertas condiciones de posibilidad para que se lleve adelante un proceso de duelo, retomando las palabras de la autora, “... que el trabajo de duelo cobije a estas vidas no lloradas” (2014:31). Sin lugar a dudas, la conformación de una Comisión de la Verdad con los testimonios y la información obtenidos genera el acompañamiento necesario para las víctimas, y las condiciones políticas y sociales para que un proceso de duelo y de justicia tengan lugar.

Las Comisiones de la Verdad

Sostenemos que: “Las comisiones de la verdad son organismos oficiales no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y



consecuencias relativas a pasadas violaciones de los derechos humanos al brindar atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento, con frecuencia después de largos períodos de recibir estigmatizaciones y ser escuchadas con escepticismo. Las comisiones de la verdad pueden contribuir a procesos judiciales y a las reparaciones mediante sus conclusiones y recomendaciones. De esta manera, pueden ayudar a que las sociedades divididas puedan superar la cultura del silencio y de la desconfianza” (Cuevas, Rojas y Baeza, 2003)

En diferentes países de la región se han conformado comisiones de la verdad que han implicado procesos histórico – sociales y políticos diferentes. La Comisión de la Verdad en Argentina se conformó con la llegada de la democracia en 1983 luego de los gobiernos militares y sobre todo del gobierno de facto de Rafael Videla que inició en 1976 y dejó un importante saldo de personas desaparecidas. El escritor Ernesto Sábato fue quien presidió a la Comisión y se tomaron cientos de testimonios duros, claras expresiones del horror dando lugar a “Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas”. Este importante proceso de justicia y de enjuiciamiento a los militares responsables de llevar adelante atrocidades y violaciones a los derechos humanos quedó interrumpido con la promulgación de las leyes Punto Final y Obediencia Debida impulsadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Estas leyes junto con los indultos otorgados por Carlos Menem fueron conocidas como las leyes de la impunidad.

En Guatemala se conformó la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en julio de 1997 que fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Guatemala. La intención era esclarecer las violaciones a derechos humanos y hechos de violencia que causaron sufrimiento a la población de Guatemala durante 30 años de la guerra. Esta comisión esclareció los hechos pero no era de carácter procesal por lo que no estaba facultada a identificar con nombres a los responsables. Si bien no se individualizan responsabilidades ni tiene efectos judiciales, el Estado o alguna persona pueden utilizar esta información para iniciar acciones legales. La Comisión estuvo presidida por 3 comisionados: dos guatemaltecos y uno extranjero, un alemán, para asegurarse que la Comisión no estuviera impulsada por intereses políticos.

En el caso chileno, tras la derrota moral y política de Pinochet, la sociedad chilena eligió como presidente a un miembro moderado de la oposición quién había anunciado su compromiso con la defensa de los derechos humanos. De modo consecuente con su promesa, el presidente Patricio Alwin el 24 de abril de 1994 creó la Comisión Nacional



de Verdad y Reconciliación, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos, y de este modo contribuir a la reconciliación entre todos los chilenos. Así fue como la Comisión recibió a más de 3400 familiares de desaparecidos y asesinados que presentaron múltiples casos, de los cuales una cantidad de aproximadamente 644 quedaron fuera de competencia. También se ha consultado a archivos de más de 100 organizaciones de derechos humanos, académicas, políticas y religiosas. El resultado final de las investigaciones de la Comisión fue un Informe que constó de tres partes. Una primera parte en la que se plantea una relación de los hechos de violaciones de los derechos humanos. Una segunda en la que se plantean recomendaciones para reparar el daño, y una tercera en donde se caracterizan a las víctimas, con una reseña biográfica de las mismas, muertas y desaparecidas.

Estos son algunos ejemplos de Comisiones de la Verdad que se impulsaron en otros países de la región de América Latina las cuales lograron distintos efectos y consecuencias, sin embargo, en todos los casos fue decisiva la voluntad política de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto para llevar a cabo estas comisiones. Sin embargo, estamos de acuerdo en que deben existir condiciones de seguridad en el país para llevar adelante este proceso de búsqueda de información, y de este modo no poner en riesgo y peligro a quienes deciden dar sus testimonios.

Algunos eventos en México

La relación entre las organizaciones sociales de víctimas y el gobierno puede ser pensada desde la noción de sociedad civil (Cohen y Arato, 2000, Olvera, 1999). La perspectiva de oportunidades políticas (Tarrow, 1996) ayuda a pensar en ciertos momentos en los que estos vínculos fluyen y las organizaciones civiles encuentran la posibilidad de presentar sus demandas al gobierno. Sin lugar a dudas, los tiempos de campaña presidencial generan las condiciones oportunas para que diferentes sectores sociales planteen sus requerimientos y demandas y comprometan a los candidatos a su cumplimiento en caso de llegar a la presidencia. En este sentido, se realizaron Foros con el objetivo de pensar sobre el proceso de justicia transicional y la conformación de una comisión de la verdad. El 8 de mayo de 2018 se celebró el Foro “Diálogos por la Paz y la Justicia en el museo de Memoria y Tolerancia, convocados por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, al que asistieron 4 candidatos a la Presidencia de la República de los 5 participantes. A este Foro asistieron Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Mead y Del Bronco, se presentó una agenda de paz, seguridad y



justicia firmada por más de 60 organizaciones y víctimas. Se comprometieron a reunirse con las víctimas, en caso de ganar la contienda y abordar la temática de personas desaparecidas, política migratoria, pueblos indígenas, trata de personas, feminicidio y desmantelamiento patrimonial y financiero del crimen organizado. El 14 de septiembre se realiza el Segundo Foro de Víctimas en Tlatelolco con la intención de discutir mesas específicas sobre Impunidad, la Justicia Transicional, etc. Asimismo el 22 de enero se celebró una conferencia para la entrega de propuestas al Gobierno Federal a la que nuevamente han participado tanto sociedad civil como gobierno.

Sobre este Segundo Foro celebrado el 14 de septiembre de 2018 se comenta:

“También tuvimos la iniciativa de hacer el Segundo Foro de Víctimas en Tlatelolco en septiembre, ya con Andrés Manuel y mil víctimas ahí, un evento muy fuerte, y AMLO aceptó pasar la agenda a Gobernación y se comprometió a todo que sí: un mecanismo internacional en contra de la impunidad, un mecanismo de búsqueda y un nuevo modelo de reparación porque la Ley General de Víctimas, es un caos, no funciona, más que un modelo de reparación parece un modelo de asistencia, complejo y re victimizante por todos lados....” (Entrevistado 2).

A pesar de haber celebrado estos distintos eventos, los entrevistados coinciden en que no se ha avanzado sustantivamente con la organización de estos Foros, también comentan que en la medida en que las fuerzas gubernamentales se han focalizado en la Guardia Nacional, de alguna manera este proyecto eclipsó los otros procesos que implican una decidida voluntad política de llevarlos adelante. En este sentido Jacobo Dayan comenta: “Después es cuando se viene y se anuncia a la Guardia Nacional y la Amnistía de Facto con el borrón y cuenta nueva... entonces dijimos, “¡¿no hay justicia transicional?! ¿De qué estamos hablando? Entonces hablen de un modelo de reparaciones pero no de Justicia Transicional...”. Abonando a este argumento el entrevistado comenta en otro momento, refiriéndose al actual presidente de México: “Yo creo que él no quiere hacer justicia, que él quiere perdonar...”

Los entrevistados plantean diferentes interpretaciones sobre por qué se ha aplazado la cuestión de la comisión de la verdad, comentan que frente a la presión y al desafío de mostrar resultados visibles dentro de los primeros 100 días de gobierno, éste se focalizó en actividades y acciones concretas a corto plazo. Mientras que la conformación de una comisión de la verdad implicaría destinar mucho tiempo, esfuerzo y recursos, y los resultados se verían a largo plazo. De este modo lo expresaban:



“... nosotros decimos que no hay condiciones de seguridad para poder hacer una Comisión de la Verdad en todo el país... no sé si quieran hacer comisiones regionales, decía Olga (por la actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero), eso me parece brutal, eso se hizo en Perú, y fue muy complicado...”

-Es que si quieres conformar una Comisión de la Verdad, sí necesitas al Gobierno.

-Sí claro, a menos que hagas como Guatemala, una comisión no oficial, pero ¿quién financia eso? ¿Quién presiona para levantar los testimonios? (...) no creo que ninguna financiadora quiera hacerlo, aunque sí sería una forma de presionar al gobierno. Para la justicia necesitas al gobierno y para la reparación necesitas al gobierno (...) También el proceso es tan heterogéneo que armar todo esto es muy complicado...” (Entrevistado 2).

En este rastreo sobre los avances en México, es importante mencionar que se ha conformado una Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa creada por un Decreto Presidencial el 4 de diciembre de 2018, con la finalidad de aplicar, a nivel federal, los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran para el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad y esclarecer el caso.

Vidas precarias y vidas lloradas

Ahora bien, nos interesa pensar este proceso de conformación de una Comisión de la Verdad a la luz de otras posibles lecturas relacionadas a las vidas precarias, a modos particulares de administración de la vida y a las biopolíticas ¿Cómo entender las imprecisiones en las cifras de desapariciones ocurridas en México? ¿Cómo entender la falta de respuestas institucionales oportunas a las desapariciones de personas, a los feminicidios? ¿Por qué el sistema judicial tiende a una re-victimización de los familiares que denuncian las desapariciones?

El hecho de posponer la conformación de una comisión de la verdad o bien pensarla para momentos históricos que ocurrieron en la época de la Conquista, da cuenta, de alguna manera, del valor de la vida presente y de su precariedad (Butler, 2009). De este modo, siguen pendientes y resonando preguntas en torno a las desapariciones de personas tales como ¿Dónde están? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué sucedió? ¿Quién o quiénes son los responsables? entre tantas otras. En la medida en que se avance con estas interrogaciones se va dando “verdad a las víctimas”, se van construyendo narrativas que den sentido a lo sucedido, se otorgan sentidos al vacío traumático que dejan las desapariciones de personas de quienes no se conoce su paradero, se trata de un duelo abierto. Este duelo inconcluso está estrechamente relacionado a la indignación y este sentimiento frente a la falta de justicia, tiene un



potencial político muy importante (Butler, 2009: 65). Sin embargo, estas reacciones afectivas como la indignación y la injusticia están reguladas por regímenes de poder específicos (2009: 66).

Judith Butler hace referencia a la precariedad de la vida en el marco de las guerras, y alude a las vidas dignas de ser lloradas y dueloadas mientras que otras no. Dice: “Una buena manera de plantear la cuestión de quiénes somos “nosotros” en tiempos de guerra es preguntando qué vidas se consideran valiosas y merecedoras de ser lloradas, y que vidas no” (Butler, 2009: 64) “Una vida que no es merecedora de ser llorada es una vida que no puede ser objeto de duelo por que nunca ha vivido, es decir, nunca ha contado como una vida en realidad (2009: 64)” Estas reflexiones de la autora no se realizan en abstracto sino que hace referencia a políticas públicas que promueven diferencias entre las vidas, ya que la responsabilidad debe centrarse no solo en el valor de una u otra vida, sino en preguntarse por qué las condiciones que sostienen la vida de pronto fallan. En esta misma línea, es notable el aporte de Espósito con los modos singulares de administración de la vida en diferentes momentos históricos y sociales.

Esposito plantea que las formas sociales y jurídicas producen un paradigma inmunitario que permea a lo social (2009: 35-76). En este sentido, la comunidad no puede ser pensada sin la inmunidad y el Derecho funciona como dispositivo inmunitario del sistema social. Cuando el paradigma inmunitario se vincula a la dimensión colectiva de la vida, se superpone la biopolítica.

Cuando la vida se presta a ser conservada como tal, debido a la inmunización colectiva, éste esquema requiere de la normativización de la vida. Lo que resiste a la administración de la vida es la vida misma en su multiplicidad y diferencia. Las brigadas de búsqueda de los familiares de desaparecidos mantienen “viva” la ausencia de la persona, esta presencia de la ausencia es señal de una herida abierta y muestra de la falta de respuestas y de justicia por parte de las instituciones de gobierno. Por esto, consideramos que varias acciones de las organizaciones civiles de familiares resisten a las inercias institucionales que tienen un particular modo de administrar la vida y la muerte. Dichas inercias institucionales generan una re-victimización de los familiares, no se obtienen respuestas (o bien, se trata de contestaciones a destiempo) y mucho menos, se realiza justicia con los responsables. Entre las acciones novedosas que hemos podido identificar en las organizaciones de familiares de víctimas (Treviño y Falleti, 2018) están aquellas que apuntan a construir un proyecto político sostenido en la vida -a pesar de lidiar cotidianamente con la muerte- las acciones de búsqueda que



surgen de un hartazgo y de entender que la posibilidad de encontrar a sus desaparecidos depende de ellos mismos de los propios familiares.

La relación íntima entre la vida y la muerte se entiende si pensamos que existe una relación entre éstas, pues la vida está marcada para terminar, está marcada por su finitud y su muerte. El mundo de la vida es también el mundo de la muerte (...) Es decir, la vida está marcada desde su origen por un no origen que le da justo sentido a su finitud (García Masip, 2014: 56-57).

Reflexiones finales

En este artículo nos propusimos aproximarnos a la problemática de las víctimas a partir de los desafíos que se presentan para el actual gobierno nacional, mostrando también las vicisitudes que ha tenido el proceso de conformación de una Comisión de la Verdad en México. A pesar de que, hasta el momento, pareciera que esta problemática no es prioridad para la agenda gubernamental al menos a nivel nacional.

Con el objeto de pensar esta cuestión, y atendiendo a los elementos del contexto socio-político, hemos dado cuenta de la conformación de la Guardia Nacional, de la Comisión de la Verdad para investigar lo ocurrido en la época de la conquista y de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso de Ayotzinapa, Considerando este último, se atiende a los familiares para este caso en específico.

Estos elementos contextuales nos ayudan a analizar la posibilidad o no de que prospere el desafío de “dar verdad a las víctimas” como política de justicia gubernamental en México. Esta deuda social con las víctimas es importante pensarla en términos de la memoria colectiva y el lugar que ocupan los testimonios en la construcción de la memoria. La promoción o no de estos procesos simbólicos e históricos tienen efectos significativos en el tejido social de una sociedad. Como hemos planteado, la elaboración del evento traumático por la pérdida de un ser querido debe estar acompañada de una sociedad empática con quienes sufren por estas atrocidades, que sea capaz de demandar justicia y el esclarecimiento de lo sucedido. En general, producen estas condiciones sociales cuando se observa una voluntad política de los gobiernos por hacer justicia.

En este trabajo también hemos recuperado los eventos que dan cuenta de la relación entre la sociedad civil y el gobierno en torno a la posibilidad de conformar una Comisión de la Verdad, como fueron el Primero y el Segundo Foros en torno a la seguridad y a la justicia transicional. Asimismo nos resultó de mayor contundencia pensar esta



postergación de la creación de una Comisión de la Verdad en términos del valor precario de la vida y de las vidas dignas de ser lloradas o no. Hemos pensado estas cuestiones a la luz de los aportes de Judith Butler y de la noción de biopolítica de Espósito. Pues, al pensar sobre la problemática de las desapariciones de personas es inevitable reflexionar sobre la vida y la muerte, su administración y valor, tal y como se dan en una sociedad en particular y en un momento histórico específico.

En conclusión, el análisis sobre los devenires de la conformación de una Comisión de la Verdad en México nos permitió reflexionar sobre otros procesos simbólicos como son la memoria colectiva, los testimonios, el valor de la vida y su relación con la muerte, y por sobre todo, señalar la importancia de estos procesos para el actual gobierno que se proclama como un gran transformador de los entramados sociales y políticos en México. Es así como nos preguntamos ¿qué sucederá con esta deuda social hacia las víctimas? Y ¿cuáles son los desafíos a atravesar en un camino hacia la justicia? Dicho camino, no sólo “dará verdad” a las víctimas sino que permitirá elaborar y reubicar al dolor, y les devolverá a las víctimas un lugar de mayor reconocimiento social.

Bibliografía citada

Bucio, Nora (2019) “La Guardia Nacional combatirá a las desapariciones: Encinas”, MVS Noticias, 4 de marzo.

Butler, Judith (2009). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós.

Castillo, Isabel, Díaz, Margarita y Elena Gómez (2014) “Reconocimiento social y elaboración del trauma de origen sociopolítico. Una experiencia grupal en mujeres torturadas”. En Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales, Núm. 44, año 24, junio, UAM Xochimilco.

Cohen, Jean y Andrew Arato (2000) Sociedad civil y teoría política. México: FCE

Cuevas, Rojas y Baeza (2003) En busca de la verdad: elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz, Cap. 2 “¿Qué son las comisiones de la verdad”.

Damián, Fernando y Elia Castillo (2019). “Diputados aprueban Guardia Nacional; va a congresos locales”, Milenio, 28 de febrero.

Esposito, R. (2009) Inmunitas. Protección y negación de la vida, Buenos Aires: Amorrortu.

García, Luisa (2018) ¿En qué consiste la Guardia Nacional de AMLO?, El Universal, 14 de noviembre.

García, Canal (2014) “El imposible duelo”, Revista Debate Feminista, Nro. 50, pp. 19-31



García Masip, Fernando (2014) “¿Puede hoy la vida dar tiempo? Derrida y la biopolítica” En García Masip (coord.). Biopolíticas, instituciones y desconstrucciones. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.

Halbawchs, Maurice (2004). Los marcos sociales de la memoria. España: Anthropos - Universidad de Concepción.

Hietanen, Anna Emilia (2014) “Testimonios de las víctimas en la construcción de la memoria de la represión en Chile y México”. En Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales, Víctima y testimonio, Núm. 24, año 24, junio, UAM Xochimilco.

Jelin, Elizabeth (2001). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.

Miranda, Kevin y AP (2019) “AMLO pide a España Comisión de la Verdad por Conquista de México”, Debate, 26 de marzo.

Ohanian, Barbara (2014) “Abuelas de Plaza de Mayo: el pasado en función del presente”. En Revista Tramas. Subjetividad y procesos sociales, Víctima y testimonio, Núm. 44, año 24, junio, UAM Xochimilco.

Olvera, Alberto (1999) La sociedad civil. De la teoría a la realidad, México: Colegio de México.

Ricoeur, Paul (2008). La memoria, la historia y el olvido. México: FCE.

Treviño, Baruch y Valeria Falleti (2018) Desaparición forzada, subjetividad y vida. El caso de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León” en Psicología social y realidades contemporáneas de México. Una mirada en conjunto de estudiantes y profesores, México: UAM X, DCSyH

Soriano Hernández, Silvia (2018) Coord. Guatemala en la memoria. Ciudad de México: CIALC –UNAM.

Tarrow, S (1996) “States and opportunities: The political structuring of social movements” en McAdam, D McCarthy, J and Zald, M (eds) Comparative Perspectives on Social Movements, New York, Cambridge University Press

Valentini, Georgette (2018) ¿Qué significa la “Cuarta Transformación” de AMLO?, news cultura colectiva, 2 de julio.

Villa Avendaño, Anelí (2018). “El testimonio en la reconstrucción histórica de la guerra contrainsurgente de Guatemala desde la perspectiva de la esperanza”. En Soriano Hernández (coord.) Guatemala en la memoria. México: CIALC-UNAM.

Fuentes periodísticas

<<https://bit.ly/35eDL1T>>

<<https://bit.ly/3rPRC8m>>



Entrevistas realizadas

Entrevistado 1. Daniel Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entrevista realizada el 20 de febrero de 2019

Entrevistado 2. Jacobo Dayan, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y profesor en varias universidades en México, entrevista realizada el 28 de febrero de 2019.

Entrevistada 3. María Paula Saffon, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entrevista realizada el 6 de marzo de 2



Estado moderno/colonial y resistencias políticas: Una aproximación al caso chileno.

Michel Sebastián Canales Cisterna¹
Felipe Sebastián Muñoz González²

Resumen

Nuestro análisis trata sobre cómo opera el Estado-nación moderno/colonial desde la resistencia indígena y la violencia política en el marco del sistema económico capitalista en su fase neoliberal contemporánea. Específicamente nos interesa; primero, identificar los métodos de acción y organización de la resistencia indígena contra el Estado-nación chileno; segundo, comprender la articulación de las identidades latinoamericanas en el siglo XIX; tercero y último, desarrollar una crítica al extractivismo ecológico y epistemológico. Profundizando en la organización social y violencia política contra el Estado desde la realidad indígena, cuyo objetivo es la recuperación del territorio ancestral –usurpado durante los últimos cinco siglos y asignado a colonos y privados– para reconstruir la nación mapuche. Territorio que actualmente padece la devastación que produce el libre “progreso”, “desarrollo”, “crecimiento”, etc., del capital global. Este escenario es garantizado por el armatoste estatal a través de la instauración de mayor técnica y militarización en la “zona de conflicto”, junto a la manipulación del aparato comunicacional y legal patrocinado por la Constitución del poder/saber colonial. En síntesis, adentrarnos en el contexto del Estado-nación como un territorio en resistencia indígena situado en Latinoamérica.

Palabras clave

Estado; Movimiento indígena; Violencia política; Extractivismo.

El “yo” latinoamericano y el “otro” europeo en el siglo XIX

Para un marco histórico que haga posible comprender las condiciones de articulación en que devienen las identidades latinoamericanas en el siglo XIX. Nos centraremos en cuáles y cómo se imbrican las contradicciones, determinaciones y fuerzas (económicas, políticas, tecnológicas, culturales e ideológicas) que establecen la hegemonía de Europa en Latinoamérica. A modo de introducción, señalemos la relación entre identidad y Estado-nación según Quijano (2000):

Un Estado-nación es una suerte de sociedad individualizada entre las demás. Por eso, entre sus miembros puede ser sentida como identidad. Sin embargo, toda sociedad es una estructura de poder. Es el poder aquello que articula formas de existencia social



dispersas y diversas en una totalidad única, una sociedad. Toda estructura de poder es siempre, parcial o totalmente, la imposición de algunos, a menudo cierto grupo, sobre los demás (p.15).

Al respecto, Larraín (2014) siguiendo ideas de Véliz (1980) en torno a una fuerte tradición cultural centralista en América Latina, comparte que hay cuatro ausencias históricas que diferencian el proceso de modernización latinoamericano –y, por extensión, el chileno– respecto del europeo: la ausencia de feudalismo, la ausencia de disidencia religiosa, la ausencia de una Revolución Industrial y la ausencia de algo parecido a la Revolución Francesa. De hecho, el análisis contrario lleva a pensar que, primero, hubo centralismo político no desafiado por poderes locales; segundo, un monopolio religioso católico no amenazado; tercero, una orientación económica exportadora de materias primas que no aseguró la existencia de una burguesía industrial poderosa e independiente y, por último, un poder político autoritario marcadamente no participativo. En este contexto, la conformación de Estados-nación en América Latina debe ser comprendida con sus rupturas, pero también con sus continuidades, ya que, al mismo tiempo que las Independencias produjeron la autonomía administrativa o técnico-política respecto de la Corona española, también reprodujeron la dependencia económica y el control cultural que ejercían Europa y Estados Unidos. Por consiguiente, las independencias políticas latinoamericanas, primeramente, marcan la crisis de identidad. Por ejemplo, en el caso chileno producto de los conflictos bélicos se describe que “después de la Independencia el sentido de la chilenidad era mucho más precario de lo que es hoy: se estaba saliendo de una crisis de identidad, una transición entre ser colonia española y ser país independiente, mediada por una guerra con chilenos en ambos bandos” (Larraín 2014, p.90). Como resultado, la crisis de identidad asociada a la inestabilidad política, determina que el primer periodo histórico de transición hacia la modernización latinoamericana sea aristocrático, oligárquico, etc., por la continuidad del carácter restrictivo de la participación de la sociedad civil o el pueblo en su conjunto. Al respecto, Góngora (1981) se refiere al “Estado Portaliano” cuyo espíritu orienta la primera Constitución estable de Chile en 1833:

Pero la específica concepción “portaliana” consiste en que realmente Chile no posee la “virtud republicana” que, desde Montesquieu y la Revolución Francesa, se afirmaban ser indispensables para un sistema democrático, de suerte que la Democracia debe ser postergada, gobernando, entretanto, autoritariamente pero con celo del bien público, hombres capaces de entenderlo y realizarlo (p.13).



Más aún, las clases dirigentes latinoamericanas en el proceso de construcción de una identidad Estado-nación homogénea en consonancia al proyecto moderno, instituyen en los países del Cono Sur latinoamericano (Chile, Argentina y Uruguay) la exclusión y eliminación de la población mestiza e indígena respectivamente (Quijano, 2000). En consecuencia, las clases dirigentes articulan la salida de la crisis de identidad a través de:

- A. La consolidación de los Estados-nación en base a la represión.
- B. La búsqueda de la «razón de ser» *de las identidades latinoamericanas*.

Para la letra b) la denominada «corriente civilizatoria», –vinculada al establecimiento de la dicotomía civilización/barbarie– se transforma en la base intelectual del proyecto modernizador de las clases dirigentes latinoamericanas. Dicha corriente se sustenta en el pensamiento positivista *ad hoc* al siglo XIX. A propósito, Corvalán (2011) señala:

la historia de América fue reinterpretada, en particular de acuerdo a lo que Comte llamó la “ley de los tres estados”. De acuerdo a ella –como lo planteara Gabino Barreda en México–, la colonia representaría el estado teológico; la independencia, con su liberalismo abstracto, el metafísico; y lo que para nuestra América estaría planteado a la fecha, es decir, durante la segunda mitad del siglo XIX, sería avanzar hacia el estado positivo –con su ciencia, técnica y capitalismo– que sería la fase última del progreso humano (p.34).

A partir de la importación del pensamiento europeo es que las clases dirigentes latinoamericanas terminan por justificar la necesidad del progreso/racional entendido como la empresa que busca construir una sociedad mejor. En este contexto, el dualismo ontológico (Grosfoguel, 2013) de civilización/barbarie oculta la función de establecer una diferencia entre lo humano y lo salvaje, lo racional y lo irracional, el progreso y el retroceso, como un equivalente, de lo europeo y lo latinoamericano. “La identidad latinoamericana surge así de los elementos compartidos por las identidades nacionales latinoamericanas en tanto reconocidos e imputados por el <<otro>> europeo” (Larraín, 2014, p.55). Por esta razón, las identidades raciales impuestas (indio, mestizo y negro) legitimaron la inferioridad de las culturas diferentes a la occidental. “Por debajo de esa codificación de las relaciones entre europeo/no-europeo, raza es, sin duda, la categoría básica” (Quijano, 2000, p.6). En Latinoamérica no sólo se clasificó socialmente en torno a la clase, sino también a la “raza”, allí radica gran parte de la tesis del “giro descolonizador” (Dussel, 2013). A modo de síntesis, esbozamos que la salida de la crisis de identidad latinoamericana producida por las Independencias y la entrada a la



conformación de los Estados-nación en el siglo XIX estuvo mediada por la reproducción histórica del colonialismo europeo y el capitalismo mundial.

La «no necesaria correspondencia» entre la ruptura epistemológica y el esencialismo ontológico

Dada la estructura del imperialismo/colonial (Grosfoguel, 2011) del poder, el saber y el ser (Grosfoguel, 2016). La reproducción del colonialismo europeo también tuvo una repercusión en el lugar más profundo de la cultura, es decir, la producción de conocimiento. “Europa también concentró bajo su hegemonía el control de todas las formas de control de la subjetividad, de la cultura, y en especial del conocimiento, de la producción del conocimiento” (Quijano, 2000, p.5). Esto determina el problema de corte epistemológico. En este campo, se reconoce que el aporte fundamental de una mirada latinoamericana para la comprensión de su propia identidad, habita en la producción de una ruptura epistemológica con la reproducción hegemónica del conocimiento europeo. A partir de esto, sin embargo, es preciso advertir que hay una potencial relación entre dos ideas; por un lado, la ruptura epistemológica con el eurocentrismo y, por el otro, el esencialismo latinoamericanista *a priori*. Esta distinción alude a la «no necesaria correspondencia» (Hall, 2010) entre la ruptura epistémica y el esencialismo ontológico. En síntesis, la crítica latinoamericana señala que la producción del conocimiento, debido al control cultural históricamente dado, sólo se ha dedicado a la reproducción del conocimiento hegemónico europeo. Entonces la cuestión radica en que la producción de conocimiento latinoamericano sea auténtica en la medida que rechace el control cultural europeo y el silenciamiento de nuestra(s) intersubjetividad(es), es decir de nuestro propio enfrentamiento cotidiano a las circunstancias latinoamericanas como estructuras colectivas. Sin que ello, represente caer en la negación de una vez por todas del legado epistemológico acumulado a través de sabidurías, que en retrospectiva histórica van más atrás de la modernidad/colonial. Esto particularmente a modo de no ser objeto de nuestra propia crítica, esto es, razonar que pertenecer a un lugar geopolítico determinado, implica necesariamente un mejor conocimiento de otras realidades socio-culturales e históricas. A saber, la superioridad epistemológica occidental como producto de la universalización de la “razón” no como idea, sino como esencia de la verdad.

La crítica al causalismo/dualismo/positivista

La investigación-acción participante (Fals Borda, 2009) en el campo de estudio desarrolla un diálogo/colaborativo (Freire, 2005) para realizar un contraste con el marco



teórico en proceso de construcción, cuya pretensión normativa no adhiere a ninguna forma de pensamiento lineal o causalismo/positivista. “El viviente no deja que la causa alcance su efecto” (Hegel en Fals Borda, 2009, p.260). Por lo cual, primero, introducimos el “problema” de la contradicción en la lógica (Iliénkov, 1979), ya que, la dialéctica no es otra que la de una formación histórica determinada. Segundo, el pensamiento epistémico surge precisamente con el desajuste, el desfase que existe entre teoría y realidad, ya que, el ritmo de la realidad socio-histórica no es el mismo de la construcción conceptual (Zemelman, 2001). Tercero, no consentimos la ciencia a-histórica, objetivista y universal occidental. Lo cual no significa un abandono del análisis metodológico ni empírico, sino que dichos conceptos requieren al menos un esbozo epistemológico, “si por episteme entendemos el esfuerzo del hombre por construir una relación con la realidad. No es en sí la realidad ni es la relación, pero sí es el esfuerzo de su construcción” (Zemelman, 2004). En otras palabras, la epistemología crítica subraya el análisis cualitativo-inductivo o cuantitativo-deductivo como un dualismo/positivista. “Es decir, si yo construyo un enunciado teórico (...), pero lo construyo y lo aplico por ejemplo a través del método hipotético deductivo a la realidad sin plantearme este distanciamiento que aquí estoy llamando “problema” (Zemelman, 2001, p.9). Aparecería por la “puerta de atrás” el objeto de la crítica propia: la imposición del conocimiento.

Notas

¹acmsebastian@hotmail.cl. Universidad de Playa Ancha Chile

²felipeeuc@gmail.com. Universidad de Playa Ancha Valparaíso

Bibliografía

Corvalán Marquez, L. (2011). Civilizadores e identitarios emancipadores en el pensamiento latinoamericano. *En libro: La lucha por un pensamiento propio en nuestra América* (pp.27-45). Santiago, Chile: Editorial América en Movimiento.

Durkheim, E. (2001). *La división social del trabajo*. Madrid: Ediciones Akal.

Fals Borda, O. (2009). Cómo investigar la realidad para transformarla. *En libro: Una sociología sentipensante para América Latina* (pp.253-301). Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores.

Góngora, M. (1981). El Estado Nacional Chileno en el siglo XIX. *En libro: Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Santiago, Chile: Ediciones La Ciudad.



Grosfoguel, R. (2011a). La descolonización del conocimiento: dialogo crítico entre la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos. Barcelona: CIDOB. Disponible en: <<https://bit.ly/3rWygx>>

Grosfoguel, R. (2013). Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI. *Revista Tabula Rasa*, (19), 31-58.

Grosfoguel, R. (2016). Del extractivismo económico al extractivismo epistémico y ontológico. *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo*, 1(4), pp.33-45. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.15304/ricd.1.4.3295>

Hall, S. (2010). Parte II. Contribuciones a la teoría social: no-esencialismo, hegemonía e ideología. *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales* (pp.73-131). Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich (Eds). Instituto de estudios sociales y culturales Pensar, Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Peruanos, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, Envió Editores.

Larraín, J. (2014). De la Colonia a la modernidad oligárquica. *En libro: Identidad chilena* (pp.79-100). Santiago, Chile: LOM Ediciones.

Nietzsche, F. (2016). Libro Primero. *Aurora* (pp.29-73). Santiago, Chile: Galas Ediciones.

Segato, R.L. (2016). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. *En libro: La guerra contra las mujeres* (pp.57-90). Madrid, España: Traficantes de Sueños.

Véliz, C. (1980). La tradición centralista en América Latina. *Estudios Internacionales*, 13(50), p. 151-162. doi:10.5354/0719-3769.2011.16624

Zemelman, H. (2001). Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las ciencias sociales latinoamericanas. México: Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina (IPECAL).

Videografía

Muñoz, D., & Marín, D. (diciembre de 2012). E. Dussel explica la teoría: “El giro descolonizador” (The Decolonaizing Turn [archivo de vídeo]. Recuperado de: <<https://www.youtube.com/watch?v=ml9F73wIMQE>>

Zemelman, H. (2004). *Historia y autonomía en el sujeto* [archivo de vídeo]. VIII Encuentro nacional y regional de investigación educativa. Hidalgo, México. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=tlrKmpZC5j4>>



Movimiento barrial en tiempos de “Guerra Popular”: AAHH. Laura Caller-Los Olivos entre 1989 a 1992.

Alan Arturo Pelayo Soriano

Resumen

La investigación trata sobre el movimiento barrial y su relación con la “guerra popular” iniciado por el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL). Siendo el interés de analizar el accionar político que tuvieron los barrios populares, sus pugnas y posiciones políticas; como también su lucha por el derecho a la vivienda, en el periodo de guerra interna en el Perú, específicamente en el asentamiento humano Laura Caller – Los olivos entre los años de 1989 a 1992.

Palabras clave

Actor social; Barrios populares; Partido Comunista del Perú; Sendero Luminoso; Violencia política, Estado peruano.

Introducción

En plena guerra interna la población del asentamiento humano Laura Caller se convirtió en sujeto político, era un grupo social que abarcó un espacio inhabitado, vacío, pero empezaron a construir un lugar que sea habitable; para hacerlo tenían que enfrentarse a las fuerzas armadas del Estado peruano en plena guerra interna a finales de los años 1980. En esta confrontación política, la población fue creando el espacio inhabitado en el asentamiento humano Laura Caller.

Esa población no era una clase social compacta, no era una unidad, sino una multitud, es decir una multiplicidad de singularidades, donde podemos encontrar una gama de diferentes grupos sociales diferenciados como obreros, comerciantes, ambulantes, etc. Esas prácticas colectivas ponían en cuestión el viejo orden y forjaban e iniciaban una nueva vida en sus chozas de esteras en Los Olivos de la zona norte de la ciudad de Lima.

La multitud como sujeto político en pos de construirse a sí mismo en el movimiento social, no era un ente aislado, sino que en la época de la guerra interna les era obligatorio entrar en relación con los levantados en armas, o sea con el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. En el marco de la Guerra Popular -como lo llamaban los comunistas peruanos de Sendero Luminoso- y en su etapa de equilibrio estratégico que empezaba en 1988, la dirección central del PCP-SL había planteado



organizar, los que ellos denominaban, los “cinturones de miseria” para la conquista del poder del Estado. Siendo Laura Caller un “cinturón de miseria”, una población que empezaba a crear un AAHH, era importante para Sendero Luminoso relacionar fuerzas con dicha población. Los unos querían conquistar el poder del Estado peruano, los otros querían tener un espacio donde vivir. Estas dos voluntades van a confluir, no necesariamente en armonía, para desarrollar un movimiento social contra el Estado.

Con esto, queremos decir, que población no ha estado ajena ni pasiva en la guerra interna, no ha estado en medio de las fuerzas de represión del Estado y los maoístas peruanos, sino que les tocó asumir una posición en el movimiento social. La multitud se mueve en el movimiento social de plena beligerancia armada.

El problema de la investigación

La investigación trata sobre el movimiento barrial y su relación con la “guerra popular” iniciada por el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL). Siendo el interés de analizar el accionar político que tuvieron los barrios populares, sus pugnas y posiciones políticas en el periodo de guerra interna en el Perú, específicamente en el asentamiento humano Laura Caller – Los Olivos entre los años de 1989 a 1992. Y cómo en plena guerra interna, en el periodo denominado por PCP-SL como etapa de equilibrio estratégico de la guerra popular, la multitud de los barrios populares se fue parcializando al asumir una posición, ya sea a favor de la lucha armada maoísta o del Estado peruano. El proceso de constitución como sujeto político de este asentamiento humano, donde los dirigentes sociales, tuvieron una parcialización política en esta disyuntiva de guerra, lo que niega la posibilidad de que los barrios populares sean sujetos contemplativos, sin capacidad de transformación social.

- ¿Cómo fue la lucha de las multitudes como sujeto político en la obtención del derecho a la vivienda en el contexto de la guerra interna?
- ¿Cuál fue la relación entre las multitudes del AAHH. Laura Caller – Los Olivos con los subversivos maoístas de PCP – SL?
- ¿Qué pugnas internas había en el movimiento social del AAHH. de Laura Caller – Los Olivosa finales de 1980?
- ¿Cómo se desarrolló la organización barrial como sujeto político en el asentamiento humano Laura Caller – Los Olivos entre 1988 a 1992 en el contexto y dentro de la violencia política generando la parcialidad política en el movimiento barrial?



Hipótesis

El movimiento barrial a finales de la década del 80' en el AAHH. Laura Caller- Los Olivos empezó a tener mayor organicidad y fortaleza, esto permitió que se pueda contener y resistir el desalojo violento de los policías. Las multitudes barriales empezaron a generar comité de lucha, de propaganda, de defensa, de “choque” para poder asegurar el derecho a la vivienda. Que a la par de la “guerra popular” y con los subversivos maoístas que empezaban a organizar en los barrios populares, entraban juntos con las multitudes barriales para realizar la defensa de la vivienda. Ese frente de lucha, era bien aprovechada por el PCP-SL para generar apoyo de y futuras bases para realizar la “insurgencia popular”. Sin embargo, dentro de Laura Caller, el movimiento barrial no era homogéneo, había pugnas internas. Algunos dirigentes, no miraban con “buenos ojos” a los subversivos maoístas, esto se debe a que el Estado había elevado su guerra de baja intensidad, además la “guerra sucia” y “acciones terroristas” de ambos bandos. Realizaba los “rastrillajes”, las desapariciones, los asesinatos; y como consecuencia, dentro del movimiento barrial, se generaba la parcialidad política, algunos dirigentes estaban con el Estado, mientras que otros se plegaban al PCP-SL. La multitud barrial se convirtió en “arena de combate”, donde se empezaba a ver las disociaciones, divergencias y pugnas por tratar plegarse a uno u otro grupo de político. El movimiento barrial como sujeto político estaba en todo su esplendor realizando alianzas peligrosas en plena “guerra popular”.

Variables

Variable independiente

- El movimiento barrial como multitud y como sujeto político.
- El PCP-SL y su relación con las barriadas.

Variable dependiente

- El derecho a la vivienda.
- La parcialidad política de la multitud barrial.

Indicadores

- Los militantes del PCP-SL que actuaban en el AAHH. Laura Caller.
- El barrio popular como multitud en Laura Caller.
- La organización del barrio popular como sujeto político en Laura Caller.
- El movimiento barrial y las acciones políticas y sociales.



Justificación del estudio

Dentro de las investigaciones en sociología, e incluso, en las investigaciones actuales son escasos los trabajos que se han hecho sobre la organización de los actores sociales de un asentamiento humano por el derecho a la vivienda en el contexto de la guerra interna en el Perú. Muchos han trabajado a los movimientos sociales en los barrios populares en una etapa de pre-guerra o no-guerra; en la literatura social, por lo menos en el Perú, no se ha encontrado un trabajo que relacione el movimiento social de los barrios populares con la guerra iniciada por el PCP – SL contra el Estado peruano. Esto me anima a seguir analizando esta conexión de barrios populares con los subversivos maoístas en contexto de guerra, pues puede servir para situaciones que pueden presentarse en el futuro próximo.

En ese sentido, esta investigación es novedosa en cuanto al tema y el enfoque que se le quiere dar.

Objetivos de la investigación

- Quiero comprender a las multitudes barriales como sujeto político que lucharon para obtener el derecho a la vivienda en el contexto de la guerra interna en los años de 1989 – 1992.
- Analizar la relación entre la multitud del barrio popular del AAHH. Laura Caller – Los Olivos con los que se levantaron en armas, los subversivos maoístas del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso.
- Explorar las pugnas internas del movimiento social en el AAH. de Laura Caller – Los Olivos a finales de los años 1980.

Antecedentes de la investigación

El antropólogo Carlos Iván Degregori realiza un balance bibliográfico de las investigaciones que ha habido sobre el PCP-SL en el libro *Qué difícil es ser Dios*, ahí plantea los diferentes autores y temas que han trabajado sobre la guerra, por ejemplo, temas sobre la memoria, estudios culturales, históricos sociales, etc.; sin embargo, hay temas que no han sido explorados. Como es el caso de “los estudios sobre la violencia en las ciudades se encuentran subrepresentados” (Degregori, 2013: 63). Y solo Jo-Mari Burt y Michael Smith han trabajado la cuestión urbana y Sendero Luminoso con solo dos artículos.

El círculo intelectual que se movía Degregori no le permitió conocer la tesis “Rompiendo el silencio: Raucana, historia de una posible base de apoyo del Partido Comunista del



Perú, o de cómo se formó el "nuevo poder" sustentada en el 2006 por el historiador sanmarquino Carlos Castillo. Es uno de los trabajos que analiza cómo el PCP-SL quiso formar una posible base de apoyo en un barrio popular.

Sin embargo, hasta el presente año no existe abundante bibliografía sobre el tema planteado. Hay artículos donde tratan el tema de modo tangencial, pero no a profundidad ni como eje central de investigación.

No ha existido en la historia republicana del Perú un movimiento social tan radical como el del PCP-SL, o como lo llama Simon Strong "El movimiento subversivo más letal del mundo". Que haya trasgredido todas las estructuras sociales, que ha hecho participe tanto al canillita de la parada como a un gran empresario miraflorentino, o a un campesino olvidado y excluido en los andes del Perú como a un gran inversionista de Europa o EEUU. Entonces se hace importante estudiarlo, analizarlo y debatirlo. Y por esa razón opté estudiar uno de los tantos temas de la violencia política en el Perú: el movimiento barrial en tiempos de guerra.

A continuación, trabajaré los antecedentes de la investigación.

La politóloga norteamericana Jo-Marie Burt en la obra "Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori" que publicó en el 2009, trabaja el tema de barrios populares y violencia política en el capítulo II. Las zonas grises y la subversión: Sendero Luminoso y la batalla de Lima. Y tiene tres subcapítulos: 1.- Los cinturones de hierro de la miseria. 2.- En las zonas grises: los estados de Sendero Luminoso. 3.- La batalla de Villa El Salvador. Ahí plantea la siguiente idea sobre la relación que hubo entre Sendero Luminoso y los barrios populares.

"En última instancia, lo que sugiere es que el éxito de la organización de Sendero Luminoso entre los pobres urbanos dependía de su distribución de bienes socialmente deseados, lo que refleja un patrón complejo y dinámico de comportamiento político entre los grupos subalternos peruanos". (Burt, 2009: 204).

Según la politóloga, la relación PCP-SL y barrios populares se da a partir del intercambio de ciertos servicios y bienes. Eso significa que había una relación pragmática entre estos dos agentes sociales. Los bienes y servicios que hizo posible la relación entre el PCP-SL y el barrio de Villa El Salvador fue el de seguridad pública, castigo y escarmiento por corrupción, control de precios justos, toma de tierras. Lo que generó, según Jo-Marie Burt, es que surjan los micro-estados. "En el caso de las barriadas de Lima, Sendero



Luminoso creó micro-Estados en los cuales se convirtió en una suerte de autoridad local que impartía juicio y castigo en casos de corrupción y delincuencia” (Burt, 2009: 207).

Si bien es cierto, la relación era de intercambio de bienes y servicio entre el PCP-SL y los barrios urbanos; sin embargo, opino, que la situación no era tan práctica, como lo realizaban los viejos partidos políticos con un asistencialismo y populismo para ganar votos, sino que en medio de la “lucha armada” y la reivindicativa de la población (mejores de condiciones de vida), los maoístas peruanos educaban políticamente, es decir politizar y ganar respaldo y apoyo en los barrios populares para la toma del poder. O sea, convertir los cinturones de pobreza en cinturones de hierro. Transformar los barrios populares en base de apoyo para su “guerra popular”.

La tesis del historiador Carlos Castillo: Rompiendo el silencio. Raucana, historia de una posible base de apoyo del Partido Comunista del Perú, o cómo se formó el “nuevo poder”. Tesis realizada en el 2006, donde estudia el asentamiento humano Raucana y su relación con el PCP-SL. La tesis trabaja desde el enfoque del PCP-SL y cómo concibe la “guerra popular”, la base de apoyo, la formación de un “nuevo poder”, la nueva organización, la guerra de baja intensidad aplicada por el Estado peruano.

El historiador Castillo manifiesta sobre su investigación lo siguiente: “El PCP desarrolló, además, una experiencia singular: creó en los extramuros de uno de los conos de Lima metropolitana un poblado piloto llamado Raucana. se trata de la primera y, a la postre, la única experiencia en su género, y ella es el tema de nuestra investigación. El estudio no solo permite analizar la formación de una base de apoyo como cualquier otra, sino también abordar su singularidad: 1) la de ser un poblado fundado específicamente para tal fin, y con el objetivo de ser replicado en el cinturón de pobreza de Lima, y 2) la de construir, al fundarse en las cercanías de la ciudad capital del Estado que decide combatir, la concreción de un salto cualitativo en su concepción maoístas, que en su concepción primigenia dice: las bases de apoyo deben desarrollarse solamente en el campo. En ese sentido, la investigación nos permite responder ¿hasta qué medida los pueblos que el PCP fue formando alrededor de las ciudades se inscribieron dentro de esta categoría, y qué papel cumplieron en el conflicto armado?” (Castillo, 2006).

Su trabajo trata sobre cómo se formó el “nuevo poder” en las ciudades, ese primer experimento urbano que realizó el PCP-SL para formar bases de apoyo para la insurgencia y la toma del poder. En cambio, en nuestra investigación no se busca estudiar la posible base de apoyo, porque en el AAHH Laura Caller aparece no porque el PCP-SL lo había impulsado, sino porque la necesidad de la misma población por tener



una vivienda donde vivir. En ese sentido, Laura Caller surge como un movimiento barrial para la toma de tierras y crear un techo donde vivir; este movimiento urbano se encontraba en un contexto de guerra interna. Entonces había dos movimientos sociales, por un lado, el movimiento barrial, por el otro la “guerra popular”. Lo que queremos investigar es cómo se relacionaron estos dos movimientos, sus pugnas, relaciones y alianzas.

Marco teórico

Bases teóricas

Para abordar la presente investigación tendré que saber qué es un movimiento social. Sobre este punto, el tema es prolijo, hay muchos autores y posiciones; sin embargo, uno de los autores que me basaré es el francés Alain Touraine.

La definición de Touraine sobre el movimiento social es lo siguiente: “La idea de conflicto, debe preferirse la de movimiento social”. (Touraine, 2006: 255) No entiende el movimiento social como acto pasivo o de mutuo acuerdo entre los actores sociales, sino que “El movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta.” (Touraine, 2006: 255). Sin embargo, ese “actor luchando” no es actor que quiera eliminar el Estado y proponer un nuevo Estado. La fortaleza del movimiento social no es un movimiento histórico, es en el sentido que se busque la transformación de la sociedad como superación sino como alternativa dentro de la sociedad. Es decir, que el movimiento social busque pugnar por la hegemonía contra un adversario para poder lograr un bienestar.

“La acción de los movimientos sociales no está dirigida fundamentalmente frente al Estado y no puede ser identificada con una acción política por la conquista del poder; al contrario, es una acción de clases, dirigida contra un adversario propiamente social. Puede haber convergencia o alianza, jamás unificación entre un movimiento social y una acción de transformación del poder del estado.” (Touraine, 2006: 258) El movimiento barrial en el AAHH. Laura Caller no es un movimiento social que quiera tomar el poder del Estado, ese no fue su objetivo social, sino era, en un comienzo, por la lucha de la vivienda. La organización de la población pugno contra las fuerzas del orden, pero no para eliminarlos sino para hacer la resistencia y preponderancia social. En otras palabras, luchó para conseguir sus reivindicaciones sociales. “Un movimiento social no interviene solo y no está jamás separado completamente de reivindicaciones y de presiones, de crisis y de rupturas que dan nacimiento a unos tipos diferentes de



luchas. Yo llamo luchas a todas las formas de acción conflictivas organizadas y conducidas por un actor colectivo contra un adversario por el control de un campo social.” (Touraine, 2006: 262).

Sin embargo, el movimiento barrial urbano del AAHH. Laura Caller – Los Olivos, en cuanto a composición social, no era algo homogéneo, sino que había una multitud. Este concepto es trabajado por Antonio Negri y Michael Hardt.

Los autores afirman sobre la multitud lo siguiente: “En efecto, al trabajar, la multitud se produce a sí misma como singularidad. Esta singularidad es lo que establece un nuevo lugar en el no lugar del imperio, una singularidad que en realidad es el resultado de la cooperación...” (Negri y Hardt, 2002: 358). En la actividad productiva se produce, no una capa social compacta, sino que se genera una multiplicidad inconmensurable, es decir todo un conjunto de grupos diferenciados que se van relacionando a través de la cooperación pero que mantienen una heterogeneidad.

Eso significa que la población no era una clase social compacta, no era una unidad, sino una multitud, es decir una multiplicidad de singularidades, donde podemos encontrar una gama de diferentes grupos sociales diferenciados como obreros, comerciantes, ambulantes, etc.

Esas prácticas colectivas ponían en cuestión el viejo orden y forjaban e iniciaban una nueva vida en sus chozas de esteras en Los Olivos de la zona norte de la ciudad de Lima.

Una de las características importantes de la multitud es la soberanía. “El movimiento autónomo es lo que define el lugar propio de la multitud.” (Negri y Hardt, 2002: 360). Claro, el movimiento barrial no estaba sujeto al PCP-SL, porque no era una base de apoyo, sino un movimiento social que surgió por la conquista del derecho a la vivienda. Y que en proceso hubo alianzas entre la organización barrial de Laura Caller y los integrantes del PCP-SL encargados de hacer trabajo político en la zona norte de Lima.

Cuando la multitud tiene autonomía se convierte en sujeto político. “La organización de la multitud como sujeto político, como posse, comienza pues aparecer en el escenario mundial.” (Negri y Hardt, 2002: 372) La multitud como sujeto político en pos de construirse a sí mismo en el movimiento social, no era un ente aislado, sino que en la época de la guerra interna les era obligatorio entrar en relación con los levantados en armas, o sea con el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. En el marco de la Guerra Popular -como lo llamaban los comunistas peruanos de Sendero Luminoso- y



en su etapa de equilibrio estratégico que empezaba en 1988, la dirección central del PCP–SL había planteado organizar, los que ellos denominaban, los “cinturones de miseria” para la conquista del poder del Estado. Siendo Laura Caller un “cinturón de miseria”, una población que empezaba a crear un AAHH, era importante para Sendero Luminoso relacionar fuerzas con dicha población. Los unos querían conquistar el poder del Estado peruano, los otros querían tener un espacio donde vivir. Estas dos voluntades van a confluir, no necesariamente en armonía, para desarrollar un movimiento social contra el Estado.

Con esto, queremos decir, que población no ha estado ajena ni pasiva en la guerra interna, no ha estado en medio de las fuerzas de represión del Estado y los maoístas peruanos, sino que les tocó asumir una posición en el movimiento social. La multitud se mueve en el movimiento social de plena beligerancia armada. La población luchaba por la vivienda y sendero luchaba por el poder del Estado, estos dos movimientos sociales no eran antagónicas, sino que se compaginaban. Eso significa que la población como sujeto político no un ente neutral, sino que de alguna manera apoyó a los senderistas.

El trabajo de investigación va ser sobre cómo considerar a la guerra de los años 80' realizado por el PCP-SL, ya que hay muchas posiciones conceptuales, por ejemplo: Guerra interna, conflicto armado, terrorismo o guerra popular. Incluso si no lo consideras como un movimiento terrorista, te ponen el apelativo de terrorista. La estigmatización impide que se apertura el debate, y, sobre todo, que se pueda comprender cuales fueron los móviles y acciones que realizaron los que se levantaron en armas contra el Estado peruano. Sin embargo, para realizar esta investigación y no caer en los prejuicios sobre esta organización maoísta, voy a trabajar sus propias fuentes, ir a comprender su discurso político/militar con el objetivo central de cómo los maoístas peruanos concibieron el movimiento social como la guerra que ellos realizaron.

La “guerra popular” es una estrategia militar planteado por el comunista Mao Tse Tung, que fue aplicado a China para la toma del poder. En el Perú, los maoístas peruanos van a querer aplicar esa estrategia militar. La guerra popular o también llamado guerra prolongada es una guerra que se desarrolla en el campo para después tomar la capital. Y consta de tres etapas bien marcadas.

- La defensiva estratégica: El enemigo es fuerte y nosotros débiles.
- El equilibrio estratégico: Las fuerzas tanto del enemigo como el de nosotros se equiparán.



- La ofensiva estratégica: Las fuerzas de nosotros es fuerte y la del enemigo débil.

“Pero el objetivo es que hay una disparidad grande entre las fuerzas del enemigo y las fuerzas nuestras y para pasar, nosotros, de débiles a fuertes requerimos un tiempo en el cual los defectos del enemigo se expresen y nuestras ventajas se desarrollen. Por eso decimos que el ejército nuestro es aparentemente débil pero en esencia es fuerte y el ejército enemigo es aparentemente fuerte pero en esencia es débil. Así, para pasar de débiles a fuertes tenemos que llevar adelante la guerra prolongada y ésta tiene tres etapas: la primera es el periodo de la ofensiva estratégica del enemigo y la defensiva estratégica nuestra. La segunda será el periodo de la consolidación estratégica del enemigo y de nuestra preparación para la contraofensiva. La tercera será el periodo de nuestra contraofensiva estratégica y de la retirada estratégica del enemigo.” (PCP, 1989: 360).

En noviembre de 1991 el PCP, escribió este documento: ¡Que el equilibrio estratégico remezca más el país! Eso significa que, para esos años, ellos (los comunistas peruanos) ya habían alcanzado la segunda etapa de la guerra prolongada. “Desde el punto de vista del desarrollo de la guerra popular, nos hemos desenvuelto así: de guerra de guerrillas a guerra de movimientos (con cuatro hitos) y hemos entrado a equilibrio estratégico. En consecuencia, el derrotero seguido y concretado, en el Plan Impulsar y sus tres tareas campañas, en cuanto a guerra popular, ha alcanzado el equilibrio estratégico y entrado a impulsar preparativos de la insurrección en ciudades.” (PCP, 1991). La llegada de la segunda etapa de la guerra popular, les ha permitido realizar un trabajo mucho más intenso en las ciudades. Llegar a este nivel de la guerra es presentir el final del orden social vigente, la democracia formal, el “capitalismo burocrático”.

Ya en Lima, el movimiento subversivo peruano, comienza a tener posicionamientos sobre las barriadas. Quiere “organizar científicamente la pobreza” para cercar y tomar el control absoluto del Estado. Este acercamiento a las ciudades ya estaba haciendo desde mucho antes, como lo menciona Gustavo Gorriti: “Contrariamente a lo que poco informados intérpretes de Sendero sostuvieron en 1987 y 1988 (que esta organización empezaba recién entonces a enfatizar la acción urbana a expensas de la rural).” (Gorriti, 2008: 121).

“En primer lugar, el PCP-SL, durante su Primer Congreso, definió como nuevo objetivo de su plan de “guerra popular” que el “equilibrio estratégico remeciera todo el país”. Para ello, planteó como eje de acción acentuar su ofensiva en las zonas urbanas, principalmente en Lima. Así, el PCP-SL incrementó notablemente sus ataques y actos



terroristas, endureciendo su relación con la población en la sierra rural y en la selva, por un lado, y movilizándolo sus bases urbanas hacia la realización de ataques y atentados más violentos, frecuentes y visibles, por otro. Con esta decisión se iniciaba el segundo “pico” estadístico de víctimas en la guerra interna.” (Hatun Willakuy, 2004: 72).

A partir de estas consideraciones sobre el PCP, vamos a analizar su actuar, cómo organizaba y qué organizaciones tenía en las barriadas de modo general, pero centralmente, nos vamos a concentrar sobre el AAHH Laura Caller, Los Olivos.

Sobre el distrito de Los Olivos, el asentamiento humano “Laura Caller”. La importancia de este asentamiento radica en su ubicación geográfica, pues se encuentra en la entrada a Lima, al venir del norte. Está localizado apenas a pocas cuadras de la carretera Panamericana Norte, lugar de ubicación estratégica para lo que sería una futura base de apoyo, para que desde allí el PCP consiga apuntalar el cerco que se había propuesto construir en el largo plazo. El accionar del PCP en Laura Caller -por lo que se sabe- tuvo características similares al que desarrolló en Raucana y, si bien no fue de la misma magnitud, dejó los fundamentos para que se desarrollara de la misma forma.

Las tierras que tienen la población de Laura Caller perteneció a la mutual de vivienda Puerto Pueblo. El presidente de la mutual fue Julio Cruzado Zavala, secretario del sindicato CTP aprista. La mutual tendrá malos manejos, hay comisión interventora, le declararon en liquidación en 1989. Es en esa situación de crisis de la mutual es donde se desarrolla la toma de tierras. Fueron ocho asentamientos humanos del programa Confraternidad: Enrique Milla Ochoa, Los Norteños, Juan Pablo II, San Martín de Porres, Armando Villanueva del Campo, Laura Caller, Los Olivos y Los Olivos de Pro.

Esta invasión no es la invasión clásica desde el campo a la ciudad, que se desarrolló en la década 60', 70' y 80', donde surgieron barriadas como El Agustino, Zarate, Villa El Salvador, etc. Podemos decir que esta toma de territorio se dio a partir de los invasores ya posesionados, personas que tenían ya vivienda pero que sus hijos, sobrinos, tíos de los alrededores del actual distrito de Los Olivos como San Martín de Porres, Independencia, Comas van a realizar la invasión. Es la invasión de los invasores ya posesionados.

La invasión se inició en febrero de 1989, pero no fue hasta el 8 de noviembre del mismo año que se posesionaron del fundo. Trajeron palos y esteras, y se ubicaron en lo que se llamaría el AAHH Laura Caller, fueron alrededor de 400 a 500 familias. Una vez



realizado la toma de tierra, la población manifiesta lo siguiente: “Ya tomamos la tierra, ¿ahora cómo nos mantenemos? Teníamos que crear organización”. Comienza a surgir el sujeto político, a crearse la organización de la población, la autocreación para el movimiento social. Además de crearse el comité de autodefensa, se creó un tópico porque había muchos heridos producto de la confrontación con la policía. Después de 4 a 5 meses empezaron dividir las tierras y lo hicieron a crear las manzanas, que eran con letras A, B, C, etc., después se convertirán en números.

“El 20 de abril de 1990 fue una fecha importante para nosotros”, afirma el poblador. Porque es el día de que va haber una fuerte represión policial con cerca de 2000 efectivos que vinieron a desalojarlos. El juez Ruiz Trigoso ordena entrar a los policías. Y bloqueamos toda la panamericana, y se enfrentaron a los policías para impedir el desalojo. Después de ese hecho, a la semana vinieron el ejército a realizar el rastrillaje. Acá hubo 5 rastrillaje, todo Laura Caller estaba acordonado, ellos tenían una lista de todas las chozas, además de buscar choza por choza para ver si se encontraba con algún senderista. Para ese entonces los senderistas ya se encontraban apoyando las medidas de lucha de población. En ese momento se había realizado una relación entre la población del AAHH con los senderistas. Eso les va permitir ganar fuerza para enfrentar a los policías y mantenernos por el lote de tierra.

Marco conceptual

- **Movimiento social:** El movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta.
- **Multitud:** multiplicidad inconmensurable y heterogéneo. Al trabajar se produce a sí misma en su singularidad.
- **Sujeto político:** es la acción social de modo autónomo que se autoorganiza, se autocrea y lucha contra la hegemonía.
- **Guerra popular:** es una guerra prolongada del campo a la ciudad y que tiene tres etapas: la defensiva estratégica, el equilibrio estratégico y la ofensiva estratégica.
- **Barriadas:** No solo se refiere a un espacio físico de viviendas y servicios básicos poco desarrollado, sino que también denota una forma de acceso a la vivienda a través de invasiones de tierras organizadas y a un eventual desarrollo gradual de las viviendas y otros servicios básicos, por lo general mediante esfuerzos de ayuda mutua de los pobladores de estas zonas.



Metodología

Tipo y nivel de investigación

Mi trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, que se base en el análisis sobre los actores sociales, como concibieron y percibieron el movimiento social de la toma de tierras, su organización y sus vivencias sociales para obtener el derecho a la vivienda en plena “guerra popular”. Llevando a cabo la investigación a profundidad, específicamente en las barriadas del norte de Lima (Asentamiento humano Laura Caller- Los Olivos entre los años de 1989 a 1992).

El nivel de investigación es comprensivo, pues se va intentar de entender y comprender a las multitudes sociales y los integrantes de PCP-SL en la dinámica de pugna y lucha por reivindicaciones y toma del Estado.

Descripción del ámbito de la investigación

La investigación se llevará a cabo en el asentamiento humano Laura Caller- Los Olivos

Población y muestra

Se hará la entrevista a personas que presenciaron o tuvieron un rol allegado o importante con el apoyo barrial en Laura Caller, al PCP.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicarán las siguientes técnicas de recolección de datos:

- 10 Entrevistas en profundidad directiva.
- Análisis de cada entrevista.
- 20 Testimonios

Los instrumentos a utilizar son:

- Observación directa.
- Observación indirecta.

La recopilación documental, periódicos, revistas, folletos, videos.

Referencias

Burt, Jo – Marie. Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori. IEP. Lima. 2009.

Castillo, Carlos. Rompiendo el silencio. Raucana, historia de una posible base de apoyo del Partido Comunista del Perú, o cómo se forjó el “nuevo poder”. UNMSM. Lima. 2006.



Degregori, Carlos Iván. Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980 – 1990. IEP. Lima. 2013.

Gorriti, Gustavo. Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú. Editorial Planeta. Lima. 2008.

Guzmán, Abimael. “Entrevista con el presidente Gonzalo”. Lima 1988.
<http://www.blythe.org/peru-pcp/docs_sp/entrevis.htm>

Hatun Willakuy Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Perú. Lima. 2004.

Negri, Toni y Hardt, Michael. Imperio. Editorial Paidós. Buenos Aires. 2002.

Strong, Simon. Sendero Luminoso. El movimiento subversivo más letal del mundo. Editorial Perú Reporting. Lima 1992.

Touraine, Alain. Los movimientos sociales. Revista Colombiana de Sociología. N° 27. 2006, pp. 255-278.

Partido Comunista Del Perú. Somos los iniciadores. Agosto. 1980.

“¡Que el equilibrio estratégico remezca más el país! Noviembre. 1991.

No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder para el pueblo. Febrero 1985. Bases de discusión. S/F. Revolución democrática. S/F. Línea militar. S/F.



Quando a justiça cala as ruas: Estudo de caso de um processo judicial contra 18 manifestantes em São Paulo.

Mariana Pinto Zoccal

Resumo

Desde as manifestações de junho de 2013 diversas violações ao exercício do direito de protesto têm sido observadas em âmbito do Executivo, Legislativo e Judiciário no Brasil, apontando para uma criminalização das várias formas de contestação e resistência social. Apesar de as instituições democráticas, ao menos formalmente, se encontrarem em funcionamento, observamos a consolidação de um contexto de “guerra permanente”, caracterizado pela relativização de direitos e garantias fundamentais e pelo empobrecimento da subjetividade. O presente projeto de pesquisa pretende analisar os “enquadramentos” de manifestantes fornecidos pelo sistema de justiça criminal, em um processo que resultou da prisão de 18 jovens, momentos antes de comparecerem a uma manifestação popular contrária ao impeachment de Dilma Rousseff, em São Paulo. “Ser enquadrado” significa ser objeto de uma armação, de uma tática mediante a qual provas são manipuláveis para que uma acusação falsa pareça verdadeira. Assim, no intuito de compreender como esse artifício de perseguição política é produzido, objetivamos investigar: a) como os manifestantes e as suas subjetividades foram retratadas nos autos do processo; b) quais os indícios e as provas utilizados para lastrar a persecução penal; c) qual o perfil dos 18 manifestantes. Para tanto utilizaremos metodologia empírica, de abordagem qualitativa, com estratégia de estudo de caso e a técnica de análise documental. O caso foi escolhido por ser emblemático nos debates sobre democracia e direitos humanos no Brasil, além de contar com grande repercussão midiática e social.

Palavras chave

Sistema de justiça criminal; Estudo de caso; Manifestação; Criminalização; Democracia.

Introdução

Nesse *paper* apresentaremos um resumo expandido do desenho inicial da pesquisa de mestrado em desenvolvimento junto ao Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), *campus* Franca/SP. Trata-se de pesquisa em fase intermediária, que ainda foi submetida ao Exame de Qualificação.



Atualmente, temos observado a aplicação de uma lógica de guerra contra ativistas e defensores de direitos humanos no Brasil. Movimentos sociais críticos que tencionam o poder público por melhores condições de moradia, de transporte e de educação convivem com a corriqueira repressão estatal, que a partir de junho de 2013 teve o seu *modus operandi* sofisticado, apontando para uma verdadeira articulação entre os poderes Executivo, Legislativo e o Sistema de Justiça para criminalizar lutas pela efetivação do direito à cidade.

Nesta pesquisa, buscamos estudar o processo judicial nº 0074736-77.2016.8.26.0050, que tramita no foro central da Barra Funda, comarca de São Paulo, envolvendo dezoito manifestantes que respondem pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e corrupção de menores (244-B da Lei 8069/90).

Fundamentação do problema

A escolha do caso se deu por ele sintetizar diversos elementos considerados emblemáticos em um Estado democrático de direito, como a infiltração de um agente do Exército em protestos; a incomunicabilidade entre advogados e clientes; a utilização de máscaras e capuzes e do porte de *kits* de primeiros socorros como indícios de cometimento de crimes; o oferecimento de uma denúncia genérica, com baixa carga probatória de autoria e materialidade e o rito moroso com que o processo judicial tem tramitado.

Maíra Machado (2017, p. 364) prevê que “em diversas situações *casos se impõem sobre nós*, isto é, o interesse pelo caso precede à identificação, com alguma clareza, do interesse da pesquisa”. O contato da pesquisadora com o caso iniciou-se em janeiro de 2017, por meio de uma notícia compartilhada pelo ex-secretário de Direitos Humanos de São Paulo Eduardo Suplicy em seu perfil na rede social *Facebook*, em que uma das manifestantes relatava não conseguir dormir após obter conhecimento da denúncia criminal contra ela oferecida.

Na denúncia, o promotor de justiça Fernando Albuquerque atribui aos manifestantes divisões de tarefas como o encargo de levar ao ato máscaras e capuzes, frascos contendo vinagre, que segundo ele, seriam “utilizados para minorar os efeitos do gás que a polícia lança para debandar arruaceiros”, disco de metal que seria utilizado como escudo e barra de ferro para “desferir golpes que lesionariam policiais e danificariam patrimônio público e particular”. Também foi atribuído a alguns a tarefa de levar materiais de primeiros socorros, que “seriam utilizados em comparsas que viessem a sofrer lesões no confronto com policiais militares, além de máscaras e capuzes” e



câmeras fotográficas e de filmagem “para registro das ações criminosas e posterior divulgação em redes sociais e outros meios de veiculação de ideias”.

Chama a atenção o fato de a denúncia ter sido oferecida após a decisão de relaxamento da prisão em flagrante dos manifestantes proferida em audiência de custódia ter transitado em julgado. Na decisão, o magistrado Rodrigo Telline de Aguirre Camargo entende como ilegal o flagrante realizado pelos policiais militares e preceitua ter ocorrido no caso uma verdadeira “prisão para averiguação”.

Após deparar-se com este caso emblemático que aponta para uma criminalização do direito à manifestação, a pesquisadora - na época na graduação em Direito - readequou o seu projeto de TCC de modo abarcar em um dos capítulos da monografia considerações sobre o incidente. Foram realizadas entrevistas com um advogado que atua na defesa de parte dos manifestantes e com o vereador Eduardo Suplicy, que relatou os acontecimentos por ele presenciados em sede policial, nos quais os jovens foram mantidos incomunicáveis, sem a possibilidade de contato com familiares e advogados.

Apesar de não ter sido possível aprofundar a análise do processo na graduação, esses contatos prévios com personagens do caso nos motivaram a dar seguimento na investigação no âmbito do mestrado em Direito, por enxergarmos o processo judicial como um rico testemunho de práticas e costumes que nos possibilitarão decifrar peculiaridades do problema posto.

Entendemos que o uso do direito penal e do processo penal para fins políticos tem representado um indicativo do avanço do Estado de Polícia no Brasil. Para Zaffaroni (2019) em cada momento histórico há determinada manipulação do poder punitivo, produzindo estereótipos e fomentando sentimentos de insegurança na população conforme a conveniência política existente. E atualmente, encontra-se em curso uma nova modalidade de controle social, segundo a qual “o inimigo já não é apenas o estereótipo de adolescente de bairro precário, do „favelado“, que vive na miséria. Agora começa a ser inimigo o opositor político” (Zaffaroni, 2018).

Essa nova modalidade punitiva recebe o nome de *lawfare*, e nasce de uma combinação de setores dos monopólios do poder financeiro e midiático com a administração da justiça penal, sob o pretexto de perseguir delitos de corrupção (Zaffaroni, 2019). O conceito foi utilizado pela primeira vez em 2001, em um ensaio de Charles Dunlap, e foi tido como “estratégia de uso – ou não uso – do Direito como um substitutivo dos meios



militares tradicionais para atingir um objetivo de combate de guerra” (Santoro, 2018, p. 63).

Temos observado em processos judiciais contra manifestantes que as sentenças costumam ser proferidas em períodos estratégicos de instabilidade política. Exemplo recente foi a sentença condenatória do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal da Capital, em um caso envolvendo 23 ativistas no Rio de Janeiro. A luta dos ativistas na arena judicial tem sido travada desde julho de 2014, tendo a última audiência ocorrido em dezembro do mesmo ano. No entanto, a sentença apenas foi proferida em julho de 2018, cerca de três meses antes das eleições presidenciais e em um contexto de intensas mobilizações sociais pela liberdade e a candidatura de Luís Inácio Lula da Silva para a presidência do país.

Essa condenação, no cenário político em que foi enunciada, permite-nos questionar se as prisões e os processamentos de ativistas de direitos humanos têm figurado como instrumentos do sistema de justiça para calar as ruas e negar a militantes políticos o direito de reivindicar a construção de outro projeto de sociedade, que se mostre plural, inclusivo, libertário e garantidor de direitos básicos para o exercício da cidadania.

Corroboramos a hipótese de que os direitos, as garantias fundamentais e os valores democráticos passaram a ser tratados como mercadorias, portanto, como objetos negociáveis ou obstáculos que podem ser facilmente afastados em nome dos interesses repressivos do Estado (Casara, 2017).

Nesse sentido, o sistema de justiça tem aderido a uma lógica de controle dos indesejáveis ao projeto neoliberal, promovendo o “enquadramento” de manifestantes, a produção de armadilhas ou incriminações falsas ou fraudulentas, com base em provas plantadas que, no final das contas, “provam” a culpa dos acusados. Quando esse “enquadramento” é produzido, o estatuto de culpado se torna uma conclusão inevitável do espectador (Butler, 2018, p. 23).

Ao enquadrar manifestantes nas categorias de “vândalos” e “criminosos mascarados”, alguns personagens do sistema de justiça parecem antecipar a culpabilidade dos jovens por ações que possam ser por eles praticadas, produzindo um estado de guerra contra os agentes policiais que buscam preservar a “ordem e a paz pública”. A repressão penal, no entender de tais personagens, deve se dar de forma enérgica e dura, pois a neutralização de tais “arruaceiros” é requisito fundamental para que o “cidadão de bem” possa exercer o seu direito ao protesto pacífico. Afinal, entendem que manifestar-se é



um direito, mas que devem atuar para que uma “minoría de criminosos” não macule a imagem dos demais manifestantes.

Nesse debate, Butler (2018, p. 08/09) elucida que algumas vezes um movimento é considerado antidemocrático, criminoso e até mesmo terrorista, e, em outras ocasiões e contextos, o mesmo movimento é entendido como um esforço popular para a concretização de uma democracia mais inclusiva e substantiva, alterando-se o discurso conforme a aliança estratégica designada. Assim, perfaz-se o seguinte dilema: quem realmente é “cidadão de bem” digno de exercer o direito à manifestação? E que operação discursiva circunscreve o “vândalo”, com que propósito?

Metodologia

A primeira versão do projeto de pesquisa de mestrado objetivava analisar como se operou a produção da subjetividade dos 18 manifestantes pelo sistema de justiça criminal. Para tanto, realizaríamos análise documental do processo e entrevistas com os jovens, buscando investigar as suas percepções sobre o sistema de justiça e eventuais danos acarretados pelo processo em suas vidas. No entanto, durante a pesquisa exploratória, constatamos que as vozes dos manifestantes pouco apareciam nos autos do processo, e que o arquivo por si só representava um campo potente para desnudar as estratégias de perseguição política de ativistas de direitos humanos.

Assim, buscando realizar uma análise condizente com o lapso temporal previsto para a conclusão do mestrado, alteramos o nosso objetivo geral, para lançar o foco sobre os “enquadramentos” produzido pelo sistema de justiça criminal em face dos manifestantes. Em termos metodológicos, propomos a realização de uma pesquisa empírica, de cunho qualitativo, pautada na estratégia de estudo de caso, com a utilização de dados fornecidos por documentos que integram o processo judicial.

A vertente teórico-metodológica adotada propõe compreender o fenômeno jurídico no ambiente social mais amplo, analisando-o como variável dependente da sociedade, de modo a trabalhar com as noções de eficiência, eficácia e efetividade das relações direito/sociedade. Preocupar-se-á, portanto, com a facticidade do direito à manifestação e com as relações contraditórias que ele estabelece com os demais campos: sociocultural, político e antropológico (Gustin; Dias, 2013, p. 22).

Minayo e Souza (2005, p. 42) entendem que a pesquisa qualitativa tem o condão de captar a dinâmica relacional de cunho hierárquico entre pares ou com a população. Ela



objetiva, em síntese, compreender as representações e símbolos e dar atenção, também, aos sinais evasivos que não podem ser entendidos por meios formais.

A pesquisa empírica em Direito, por sua vez, remete a uma maneira de apreender o direito que passa pela coleta e análise sistemáticas de dados da realidade social, política, econômica, cultural e institucional. Qualifica-se, portanto, como pesquisa empírica em Direito todo processo cognitivo informado ou mediado por instrumentos como entrevistas, observação direta ou participante, etc. (Sá E Silva, 2016).

Triviños (2011, p. 133) conceitua o estudo de caso como uma “categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”. Para Yin (2001) o estudo de caso é apropriado quando se pretende: a) compreender e explicar dinâmicas estabelecidas em atividades da vida real que se apresentam demasiadamente complexas; b) descrever e compreender o contexto da vida real no qual ocorreu, ou ocorre, uma dada intervenção; c) avaliar e compreender uma dada intervenção num dado contexto real, explorando as situações em que os seus resultados não são suficientemente claros.

Conforme já exposto, o fenômeno de criminalização do direito de protesto é complexo e se opera de forma camuflada. Assim, no intuito de melhor compreender as dinâmicas e relações de poder, dominação e resistência que permeiam as intervenções realizadas por atores, atrizes e instituições que compõem o sistema de justiça criminal nos protestos, foi escolhido um caso emblemático para o estudo, na esperança de que a análise pormenorizada desta unidade forneça subsídios para o enfrentamento e a superação do problema.

Maíra Machado (2017) prevê que o estudo de caso foi construído para observar um fenômeno concreto contemporâneo com o objetivo de, a partir dele, realizar inferências sobre como o processo penal concretamente opera de maneira a favorecer a reflexão, com base empírica, sobre o modo como a doutrina jurídica descreve esse modo de operar.

Conforme indicado, realizaremos análise documental de partes do processo judicial. Entendemos que esses documentos são relevantes porque fornecem pistas sobre como as instituições explicam a realidade, buscam legitimar suas atividades e dão margem para interpretações e reinterpretações, podendo gerar atribuição de significados e de sentidos diversos a um mesmo termo.



Conforme elucida Farge (2009, p. 18), o arquivo petrifica momentos ao acaso e na desordem, produzindo um efeito de certeza naqueles que o leem. A palavra dita, o objeto encontrado e o vestígio deixado tornam-se representações do real. Como se a prova do que foi o passado estivesse ali, enfim, definitiva e próxima. Como se, ao analisar o arquivo, tivéssemos conquistado o privilégio de "tocar o real".

Nossa pesquisa busca, portanto, enfrentar a opacidade desse documento, realizando um exercício de desaprendê-lo e de extrair o seu sabor. Essa extração passa por esse gesto artesão, lento e pouco rentável, em que, primeiramente, copiamos no caderno de campo fragmentos de textos que entendemos como interessantes para os objetivos do trabalho, pedaço por pedaço, sem transformar sua forma ou mesmo sua pontuação. Sem pensar muito nisso. E pensando o tempo todo. Como se a nossa mão, ao fazê-lo, permitisse ao espírito ser simultaneamente cúmplice e estranho ao tempo em que os enquadramentos dos manifestantes iam se revelando.

Na etapa atual da pesquisa iniciaremos a organização e a categorização do material de acordo com os objetivos geral e específicos inicialmente delimitados. Para isso, utilizaremos o método da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), que objetiva estudar as motivações, atitudes, valores, crenças e ideologias existentes nos textos que, à simples vista, não se apresentam claramente expostos.

Dentre as possíveis formas de avaliação dos resultados a serem realizadas, merecem destaque: a) a produção acadêmica (por meio da confecção de artigos em livros e revistas e da participação em congressos); b) a devolutiva do trabalho para os personagens envolvidos; c) a produção de uma fundamentação teórica que permita captar as sutilezas dos "enquadramentos" realizados pelos personagens do sistema de justiça criminal contra manifestantes e o direito de protesto.

Resultados e discussões

Por ora, ainda não iniciamos a etapa de organização e categorização dos dados, conforme prevê o método da Análise de Conteúdo (AC). Entretanto, da leitura exploratória do material emergiram algumas impressões iniciais do campo, relativas aos tópicos listados a seguir.

"Nenhuma investigação prévia foi feita, abordamos de forma indiscriminada": a operação de controle de distúrbios civis

No depoimento prestado em juízo por um dos policiais militares que realizou a abordagem dos manifestantes, no tocante aos critérios por eles adotados para deliberar



sobre a necessidade da diligência de revista pessoal, merece destaque a ênfase dada ao caráter aleatório das autuações e à negativa de qualquer investigação preliminar: “Foi abordado todo mundo que estava com essas roupas escuras. Foi abordado quase todo mundo que estava na praça” (grifos nossos).

Buscamos acesso, pela Lei de Acesso à Informação (protocolo nº 61716198732), às normativas e protocolos policiais que regulamentam essas operações, que são denominadas como “Operações de Controle de Distúrbios Civis”. Nosso objetivo era o de compreender, ao menos formalmente, quais as diretrizes e critérios devem ser ponderados pelo agente policial em exercício ao optar pela realização (ou não) da revista pessoal de manifestantes. Entretanto, em todas as instâncias administrativas, tivemos o pedido de acesso indeferido, sob a justificativa de tratar-se de documentos classificados como “secretos e sigilosos”, que poderiam colocar em xeque “a defesa das missões e interesses institucionais da PMSP”.

“Padrão Black Bloc” e os indícios existentes

O delegado, na seção de seu relatório destinada à individualização das condutas, reitera abaixo dos nomes de cada um dos manifestantes a seguinte descrição:

[...] este agente criminoso foi detido por Policiais Militares na posse de Máscaras, Capuz, Trajando Vestes Escuras, nos padrões conhecidos Black Blocs [...] Estes objetos seriam utilizados para encobrir o rosto durante atos de Vandalismo e Violência, Danos Ao Patrimônio Público, Privado ou Prática De Lesão Corporal (sic).

O trecho acima foi “copiado e colado” nas 18 caracterizações realizadas, acrescentando-se em alguns casos elementos adicionais como o porte de *kits* de primeiros socorros, de uma barra de ferro, de um extintor de incêndio, de equipamentos de fotografia e filmagem, de celulares e de um *skate*.

Foi anexado ao relatório do delegado um dossiê intitulado “*As manifestações populares no Brasil desencadeadas a partir de 2013*”, de autoria própria, no qual ele manifesta o desejo de informar à autoridade julgadora “a extensão e a gravidade” das práticas coletivas orquestradas pelo “movimento perverso” denominado *Black Bloc*. No dossiê, o caso dos 18 manifestantes em momento algum foi mencionado. Apenas tratou-se genericamente das origens da tática *Black Bloc* e de suas principais diretrizes, pautadas na desobediência civil, na ação direta e na contrariedade ao sistema político e econômico vigente.



O delegado cita tanto textos de articulistas como Kim Katagui e Reinaldo Azevedo, como entrevista concedida pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos ao Jornal Folha de São Paulo, na qual é defendida a necessidade de manutenção do caráter pacífico dos protestos, para corroborar sua hipótese de que “as cidades, tomadas pelos manifestantes, ficam totalmente paralisadas e o comércio fecha as portas com receio da violência e depredação” (sic). Assim, para ele, diante do agravamento da sensação de medo e insegurança da sociedade, faz-se necessário “o uso de força policial para manutenção da ordem e garantia do convívio social harmônico” (sic).

Dentre os questionamentos realizados pelo delegado aos jovens em sede policial, destacam-se: “O que o interrogando estava fazendo no momento de sua abordagem? Conhece alguma das pessoas autuadas em sua companhia? O contato entre vocês se deu por internet, telefone ou outro meio de comunicação? [...] Qual seria a função do interrogando no grupo de pessoas dentre as quais foi detido? [...] Já participou de alguma manifestação anterior?” (grifos nossos).

O Perfil dos manifestantes detidos

Sobre o perfil dos manifestantes, que será posteriormente comparado aos dados trazidos pelo INFOPEN, extraímos as seguintes características:

- a) sexo: 12 homens e 09 mulheres;*
- b) raça: 19 brancos e 02 negros;*
- c) idade: média de aproximadamente 22 anos;*
- d) escolaridade: ensino fundamental incompleto (01), ensino fundamental completo (02), ensino médio incompleto (02), ensino médio completo (06), ensino superior incompleto (06), ensino superior completo (04);*
- e) estado civil: todos solteiros;*
- f) profissões declaradas: arquiteto, artista plástico, malabarista, estudante, autônomo, tradutor, freelancer, funcionária em loja de shopping center, empresário, analista de sistemas e aprendiz de mecânico.*

Alguns manifestantes também declararam estarem desempregados no momento da autuação.



Leitura dos personagens do sistema de justiça sobre o direito à manifestação e a conjuntura política brasileira

Notamos no processo que alguns personagens do sistema de justiça por vezes tecem considerações sobre como entendem a efetividade do direito à manifestação e da democracia no Brasil. A partir dessas análises, faz-se possível extrair diversas moralidades e significações que influíram no enquadramento dos jovens nas categorias “padrão *Black Bloc*”, “arruaceiros”, “vândalos”, “baderneiros”, “criminosos”, “manifestantes”, “alunos exemplares” ou “pessoas de bem”.

São ilustrativos dessa tendência os seguintes discursos, proferidos pelo delegado de polícia e pelo juiz que atuou na audiência de custódia, respectivamente:

As Manifestações Populares, decorrentes da Livre Manifestação Do Pensamento, Da Liberdade De Expressão e do Direito De Ir E

Vir, são absolutamente legítimas, é Direito Sagrado De Todo Cidadão e como tais, consideram-se instrumentos da democracia. [...] Porém, havemos que ponderar que neste campo nada é absoluto, na medida em que TODOS devem respeitar seus limites, na exata medida em que correspondam a outros bens jurídicos igualmente tutelados. [...] Infelizmente, testemunhamos uma verdadeira escalada destes atos bárbaros, aumentando em incidência vertiginosamente, nos fazendo crer que uma minoria de Bandidos e Criminosos estão aproveitando estes momentos para darem vasão à esses atos bárbaros usando como pretexto o direito de manifestação e promovendo a baderna, a desordem, agressões e vandalismo. Precisamos dar um Basta nesta cultura de “tudo pode”, principalmente quando travestido, disfarçado ou imiscuído de ideologias, afinal, obrigarmos o cidadão de bem a tolerar esta situação, promovida por VÂNDALOS, seria o mesmo que lhe ceifar suas próprias garantias, tais como Integridade Física E Seu Direito De Propriedade, lembrando que também estaríamos impondo tal infortúnio inclusive ao erário público do Estado, na medida que muitos dos bens depredados nestas ações são PÚBLICOS. Estaríamos nós diante de uma situação paradoxal que para fugir de uma pecha ditatorial e repressora do passado devamos nos tornar permissivos e assim impor aos cidadãos de bem uma Anti-Ditadura, a qualquer custo!!! Claro que resquícios de um passado de opressão ainda nos assombram, mas não podemos permitir que isso nos atrapalhe em organizar nosso presente, Afinal Este Tempo Já Passou!! Mesmo!!! (Delegado, no relatório do inquérito policial).

[...] Destaco que o delito de associação criminosa, para a sua configuração, exige mais do que a mera reunião de indivíduos, exige a estabilidade do grupo tido como criminoso para praticar crimes de forma permanente. Evidentemente não é o caso dos autos. [...] Não há mínima prova de que todos se conheciam. Com efeito, os manifestantes, afinal,



poderiam simplesmente desistir de comparecer ao ato, a ele comparecer de modo pacífico ou causar algum transtorno que seria individualmente sopesado. Não há como saber, porque a polícia não permitiu a presença dos manifestantes antes de o ato de manifestação se realizar. O Brasil como Estado Democrático de Direito não pode legitimar a atuação policial de praticar verdadeira “prisão para averiguação” sob o pretexto de que estudantes reunidos poderiam, eventualmente, praticar atos de violência e vandalismo em manifestação ideológica. Esse tempo, felizmente, já passou. (Juiz, na decisão de relaxamento da prisão em flagrante).

“Eles partiriam para a destruição e o confronto”: A produção de um cenário de guerra

A expansão da lógica de guerra para o cenário dos protestos pode ser observada no emprego da expressão “confronto entre arruaceiros e policiais” reiteradamente citada na denúncia. As condutas dos acusados são descritas pelo promotor de justiça de modo a reforçar a dicotomia bélico-binária, que atribui aos policiais o *status* de amigos e aos manifestantes o de inimigos. São ilustrativos da tendência os seguintes fragmentos:

[...] os ora denunciados rumaram para a Rua Vergueiro, nº 829, Liberdade, nesta cidade e comarca, onde distribuíram referidos materiais na forma acima descrita e de onde partiriam para os locais de destruição e confronto.

A organização criminosa também convencionou que [...] levariam com eles materiais de primeiros socorros, que seriam utilizados em comparsas que viessem a sofrer lesões no confronto com policiais militares, além de máscaras e capuzes. [...] ficaram encarregados de levar consigo máscaras e capuzes, frascos contendo vinagre - utilizado para minorar os efeitos do gás que a polícia lança para debandar arruaceiros - disco de metal que seria utilizado como escudo e barra de ferro para desferir golpes que lesionariam policiais e danificariam patrimônio público e particular.

Na denúncia, a rua é caracterizada como um verdadeiro campo de batalhas, no qual dois polos adversários, munidos de armas de ataque e de defesa, procuram (des) ocupar o território em disputa. Na descrição, o vinagre parece equivaler ao gás lacrimogêneo e o disco de metal aos cassetetes e balas de borracha. Os supostos argumentos de “paridade de armas” e de “perigo de destruição e confronto” são instrumentalizados para que a intervenção do sistema de justiça contra manifestantes pareça legítima aos olhos do expectador. Essa estratégia pode ser lida, nas entrelinhas, no próprio relatório do delegado, que dispôs que:

Na atualidade, não há legislação vigente no Brasil que regulamente o direito à livre manifestação e, dada a essa ausência, desde 2013, quando os atos de violência e



vandalismo passaram a fazer parte destes movimentos sociais, os agentes criminosos identificados desde então vem sendo enquadrados na Lei de Segurança Nacional nº 7.170/1983, na Lei de Organização Criminosa nº 12.850/2013, ou mesmo através do Código Penal, como se mostra no presente caso [...]. Data máxima vênia, neste caso em concreto, as tipificações atribuídas às condutas dos agentes criminosos foram as mais brandas dentro desse universo de possibilidade acima mencionado e mesmo assim trouxeram a indignação dos partidários dos movimentos sociais e de alguns outros setores da sociedade que não conseguem apreciar tais posturas de forma objetiva, pautada em critérios democráticos verdadeiros, Sem Ódio Ou Paixão! (grifos nossos)

Do fragmento exposto, extraímos que a subsunção da conduta dos manifestantes aos tipos de associação criminosa e corrupção de menores foi fruto de juízo (declaradamente) arbitrário do delegado, condicionado por circunstâncias externas, como a necessidade de “vencer a guerra” e neutralizar o inimigo. O arcabouço legal, com sua característica elasticidade, foi moldado e aplicado conforme a conveniência política existente no caso.

Observamos que o *lawfare* aplicado contra os 18 manifestantes do CCSP, se comparado ao que comumente tem-se entendido por *lawfare* no âmbito da operação Lava Jato, apresenta certas peculiaridades, como a inexistência de delimitação precisa do inimigo anterior ao momento da autuação policial. A sua delimitação, entretanto, também não nos parece indeterminada.

A escolha do inimigo parece-nos determinável, de modo que, quando os protestos passam a ser lidos pelos governantes e pelas forças policiais como inscritos na categoria “desordem”, atrapalhando o comércio e afrontando os ditames do mercado, o inimigo enfim é escolhido, manipulando-se o sistema legal e midiático para promover o seu aniquilamento. E tal como se dá no processo de escolha da fundamentação legal a ser aplicada, a qualificação das vítimas nesses casos também nos parece arbitrária e, por vezes, fruto de acasos como estar no lugar errado e na hora errada.

Pela garantia da Lei e da Ordem: Um capitão do Exército infiltrado

No momento da prisão dos 18 manifestantes, foi detido junto ao grupo o capitão do Exército Willian Pina Botelho, conhecido pelo codinome “Balta Nunes”. Em razão de Balta ter sido o único detido a não ser encaminhado ao DEIC, os manifestantes passaram a desconfiar de tratar-se de um agente policial infiltrado.

A Ponte Jornalismo analisou as redes sociais do agente, localizando “sinais de um perfil falso”, como o fato de a UFRJ afirmar que “não havia ninguém com o nome Balta ou



Baltazar Nunes entre seus alunos, embora ele afirmasse ter estudado lá”. No aplicativo *Tinder*, apurou-se também que “suas conversas frequentemente misturavam paquera com perguntas sobre manifestações anti-Temer” (Ponte, 2018).

Após a detenção dos manifestantes, Balta passou a procurar “diversos militantes, nas redes sociais, para tentar convencê-los de que não era infiltrado”, alegando ter sido “levado para outra delegacia e libertado após pagar R\$ 1200,00 em suborno para um delegado da Polícia Civil”. A reportagem localizou o *Instagram* de Willian Pina Botelho e “mostrou suas imagens para cinco pessoas que haviam sido enganadas por Balta. Todas confirmaram: era a mesma pessoa” (Ponte, 2018).

As manifestações das autoridades, após a exposição da presença do capitão entre o grupo, se mostraram contraditórias. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota publicada no dia seguinte da autuação, negou “a existência de uma operação conjunta na ocasião” e afirmou que “não conhece o homem apontado pela reportagem como um suposto oficial das Forças Armadas”. Já o comandante-geral do exército, general Eduardo da Costa Villas Boas, em entrevista à Rádio Jovem Pan, afirmou que “houve uma absoluta interação com o governo do estado na prisão dos jovens do CCSP”, sem dar maiores detalhes (Ponte, 2018).

Para o Exército, o capitão não violou direitos “ao dar a aparência de aderir à conduta do grupo, nem ao observar-se as suas ações em tudo aquilo que fez de maneira ostensiva”. O ofício do Exército assegura que o capitão Botelho estava legalmente autorizado a desenvolver “atividades de inteligência” em São Paulo. A autorização estaria baseada em dois decretos federais: um, publicado em 08 de agosto, que determinava o emprego das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, e outro, de 31 de agosto, que estendia a mesma determinação para a cidade de São Paulo (PONTE, 2018, grifos nossos).

Após a publicidade do caso, diversos procedimentos de investigação foram abertos no Exército; na Procuradoria de Justiça Militar, do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial; e na Promotoria da Justiça Militar; sendo todos eles arquivados pela existência dos Decretos de Garantia da Lei e da Ordem dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (Ponte, 2018).

Em julho de 2018, entretanto, sobreveio aos autos do processo um ofício do procurador do MPF Marcos Ângelo Grimone, informando à juíza que a 7ª Câmara da Coordenação e Revisão do Controle Externo da atividade policial do MPF havia rejeitado o pedido de



arquivamento do procedimento investigatório que visava apurar a conduta de abuso de autoridade e de identidade falsa do capitão do Exército.

Todavia, a investigação realizada pelo MPF no caso também resultou em posterior arquivamento. No dia 28 de novembro de 2018, atendendo a um pedido de habeas-corpus em favor de Botelho, feito pela Advocacia-Geral da União, o TRF-3 ordenou o trancamento da investigação, por considerar que não havia indícios de crime contra o militar (PONTE, 2019).

Apesar de o major do Exército não ter sido mencionado no inquérito policial e na denúncia contra os 18 manifestantes, a sua presença no CCSP foi reiteradamente trazida aos autos do processo por advogados e pelo próprio MPF. Assim, por tratar-se de um personagem central no caso, Botelho foi arrolado como testemunha de defesa por um dos advogados. Extraímos dos memoriais apresentados pela Defensoria Pública paulista que, em seu depoimento, o Major relatou que:

[...] estava na qualidade de observador de inteligência na ocasião da passagem da tocha paraolímpica [...] Atua na inteligência desde 2013. [...] Participava de um grupo de Whatsapp, e outro de Facebook em razão da função, nos quais interagiu de forma direta e geral [...] Era um meio de colher informações, horários de eventos. As conversas nos grupos eram amistosas.

Entendemos que o arquivamento de todas as investigações que buscaram apurar a conduta de infiltração do major do Exército remete-nos ao processo de blindagem das forças policiais que cometem excessos em suas abordagens contra manifestantes. Assim, legitima-se a colheita sigilosa de dados e informações relativas aos movimentos sociais, característica de períodos autoritários, nos quais não existem limites a serem observados no exercício das atividades de inteligência policial.

As reiteradas tentativas de engessamento da atuação de personagens do sistema de justiça que, no caso, buscaram expor o funcionamento subterrâneo do trato policial contra manifestantes, a nosso ver, também funcionam como uma espécie de chancela para que essas práticas autoritárias se perpetuem. Assim, sob o pretexto de manutenção da “ordem pública”, a justiça por vezes permanece omissa (ou lenta), distanciando-se da defesa do direito à manifestação, tido como de primordial importância para a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.



Conclusões

Conforme exposto, trata-se de pesquisa de mestrado em andamento, cujos resultados finais são, por ora, desconhecidos. Entretanto, após a realização de ampla pesquisa bibliográfica e da leitura exploratória do campo, entendemos que o caso em tela permite-nos decifrar peculiaridades do tratamento fornecido pelo sistema de justiça criminal a manifestantes cujos protestos são lidos da chave da “desordem”. Dentre elas, destacam-se articulação de diversas instituições e personagens no processo de criminalização dos protestos; a infiltração de agentes do exército em grupos de mobilização social; a elasticidade das normas penais incriminadoras, que são mobilizadas conforme a conveniência política do momento; a vedação de acesso aos protocolos de atuação policiais em protestos; dentre outras.

Nesses casos, em que pese a Constituição Federal de 1988 considerar o direito de protesto como *prima facie* para a efetivação de outros direitos, os manifestantes são tidos como “inimigos” que devem ser neutralizados e combatidos em prol da manutenção da ordem. Para isso, o artifício de enquadrá-los como “vândalos”, “terroristas” e “baderneiros” é mobilizado pelo Estado para desestimular novas lutas sociais, fazendo dos ativistas verdadeiros “bodes expiatórios” no intuito de “calar as ruas” que clamam pela consolidação de uma democracia substancial.

Referências bibliográficas

- Bardin, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
- Butler. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? Tradução Sérgio Lamarão e Arnaldo Cunha. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2018.
- Casara. Estado pós-democrático: neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2017.
- Farge, Arlette. O sabor do arquivo. Tradução de Fátima Murad. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009
- Gustin, Miracy B. S.; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re) Pensando a Pesquisa Jurídica. 4ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013.
- Justiça absolve os „18 do CCSP”, presos com infiltrado do Exército. Ponte, 2018. Disponível em: <https://ponte.org/justica-absolve-os-18-do-ccsp-presos-com-infiltrado-do-exercito/>. Acesso: 06 set. 2019
- Machado, Maíra Rocha. O estudo de caso na pesquisa em direito. In: Pesquisar empiricamente o direito. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017.



Sá E Silva, Fabio de. Vetores, desafios e apostas possíveis na pesquisa empírica em Direito no Brasil. *Revista de Estudos Empíricos em Direito*, vol. 3, n. 1, pp. 24-53, jan. de 2016.

Santoro, Antonio Eduardo Ramires. Novos desenhos não democráticos no processo penal brasileiro pós-constituição de 1988: os maxiprocessos como instrumentos de lawfare político. In: *Crise no processo penal contemporâneo: escritos em homenagem aos 30 anos da Constituição de 1988*. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018.

Tribunal De Justiça De São Paulo. Processo Digital nº 0074736-77.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, São Paulo, SP, 5 de setembro de 2016. Acesso em: 06 set. 2019.

Triviños, Augusto Nivaldo Silva. *Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em educação*. São Paulo: Atlas, 2011.

Yin, Robert. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Porto Alegre: Bookman, 2001.

Zaffaroni, Eugenio Raúl. "Voltamos a ter presos políticos", diz Zaffaroni, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 06 ago. 2018. In: *Revista Fórum*. Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/voltamos-a-ter-presos-politicos-diz-zaffaroni-juiz-da-corte-interamericana-de-direitos-humanos/>. Acesso: 27 ago. 2018.

Zaffaroni, Eugenio Raúl. *Course Saber Penal Y Criminología*. 21 abr. 2019. Notas de aula.



Línea Temática 5.

**Procesos de organización, formas de
lucha y nuevos repertorios de acción**



Coletivos como Práticas Decoloniais

Kary Emanuelle Reis Coimbra

Resumo

A lógica da racionalidade moderna nega as diferenças e a negação de diferenças produz desigualdades. A experiência do colonialismo inaugurou a obliteração do diferente, a partir de práticas de extermínio ou subalternização. No Brasil podemos notar desde a resistência de grupos com práticas centenárias, como os quilombolas, os indígenas e os povos de terreiro, bem como configurações mais recentes de resistência, como as pautas levantadas por grupos a partir dos Novos Movimentos Sociais (as lutas feministas e membros da comunidade LGBTQTTI são exemplos marcantes). Por meio de uma investigação bibliográfica, neste trabalho são analisadas as ações de agrupamentos intitulados “Coletivos” como práticas decoloniais. Entre os resultados, é possível notar que a postura crítica dos artistas, a parceria entre eles e as intervenções no espaço público urbano influenciaram outros grupos. Imbuídos do mesmo ideal, também foram adotando a nomenclatura Coletivo como um modo específico da ação coletiva baseada em características como agrupamentos flexíveis e descentralizados, ênfase na troca de ideias, criação em parceria e realização de trabalhos que entrem em diálogo com o público, através de produções que adentram aos espaços do mundo.

Palavras chave

Ação coletiva; Coletivos; Práticas decoloniais.

Abstract

The logic of modern rationality denies differences, and the negation of differences produces inequalities. The experience of colonialism inaugurated the obliteration of the different, through practices of extermination or subordination. In Brazil we can note from the resistance of groups with centuries-old practices, such as the quilombolas, the indigenous and the people of terreiro, as well as more recent configurations of resistance, such as the guidelines raised by groups from the New Social Movements (the feminist struggles and members of the LGBTQTTI community are striking examples). Through a bibliographic investigation, this work analyzes the actions of groupings entitled “Collectives” as decolonial practices. Among the results, it can be noted that the critical posture of the artists, their partnership and interventions in the urban public space influenced other groups. Imbued with the same ideal, were also adopting the collective nomenclature as a specific mode of collective action based on characteristics such as



flexible and decentralized groupings, emphasis on the exchange of ideas, creation in partnership and the realization of works that enter into dialogue with the public, through productions that enter the spaces of the world.

Keywords

Collective action; Collectives; Decolonial practices.

Introdução

A partir da década de 1980, a chamada crise da modernidade passou a ser um dos fatores para a compreensão da ação coletiva contemporânea. Com o passar do tempo, movimentos foram se articulando não apenas para questionar e expor os limites da lógica moderna, como também, a partir de suas práticas, oferecer alternativas a ela. (Flórez-Flórez, 2007).

Nesse sentido, cidades latino-americanas têm sido palco de performances e instalações que “vêm ganhando espaço dentro e fora das instituições como formas de atuação política, num crescente processo de artificação da esfera pública e politização da arte”. (Sant’anna, Marcondes & Miranda, 2017, p. 825). Trata-se dos Coletivos: “agrupamentos de artistas ou multidisciplinares que, sob um mesmo nome, atuam propositalmente de forma conjunta, criativa, autoconsciente e não hierárquica”. (Paim, 2009, p. 11).

No Brasil, a expansão dos Coletivos foi popularizando-se, ao tempo em que diversos estudos foram revelando como suas práticas iam de encontro aos modelos coloniais da modernidade. (Rosas, 2006; Albuquerque, 2008; Mesquita, 2008; Paim, 2009; Borelli & Aboboreira, 2011; Freire, 2015; Sant’anna, Marcondes & Miranda, 2017; Hori, 2017; Maziviero & Almeida, 2017; Perez & Souza, 2017; Coimbra, 2018, 2019). Partindo da observação deste fenômeno social, este trabalho traz uma investigação bibliográfica sobre uma os agrupamentos que se autointitulam Coletivos no Brasil, apontando seus conceitos, características e práticas, a fim de buscar elementos que apresentem consonância com os estudos do grupo Modernidade/Colonialidade.

Modernidade: Discurso e colonialidade do indivíduo

Na obra *A sociedade dos indivíduos*, Nibert Elias (1987) define o indivíduo como o ser humano singular, enquanto a sociedade diz respeito a uma acumulação ou somatória desestruturada de muitas pessoas individuais. Dumont (1985) aponta que a noção do indivíduo autônomo é uma invenção da modernidade, cujos primeiros marcos foram os



ideais de igualdade e liberdade, no século XVIII, e a separação (ou transição) das cidades holistas e individualistas. O individualismo moderno – isto é, quando o valor supremo é atribuído ao indivíduo, e não à sociedade – tem sido um fenômeno excepcional na história das civilizações, desde o Renascimento. Nesse sentido, inicialmente houve um esforço para designar o que seria característico da modernidade, em contradição ao que a precedeu.

A modernidade pode ser definida enquanto um “estilo, costume de vida ou organização social” surgidos na Europa, no século XVII (Giddens, 1991, p. 11); ou, ainda, uma complexa “narrativa que constrói a civilização ocidental” (Mignolo, 2017, p. 2). Ao analisar as sociedades pré-modernas e modernas, Giddens (1991, pp. 72-73) suscita que a tradição (ou o fim dela como racionalidade universal) representou um divisor de águas entre os modelos civilizatórios. Em culturas pré-modernas, mesmo de grandes civilizações, a relação do ser humano com a natureza era inerente e contínua – relação esta que sofre uma inflexão quando, na modernidade, o industrialismo [e as relações trabalhistas, portanto] torna-se o principal eixo de interatividade entre os seres.

Paralelamente, o “empreendimento capitalista” garantiu a separação e distanciamento entre o modo de vida tradicional e a vida social criada na modernidade. Nesse sentido, embora toda civilização possua ciclos de juventude, maturidade e velhice, Giddens reforça que a modernidade não se caracteriza apenas enquanto civilização, pois o modelo econômico, político e militar inaugurado no Ocidente não somente adquiriu primazia, como influenciou as demais regiões do globo. (Giddens, 1991).

[...] enquanto nas sociedades tradicionais a hierarquia domina o plano ideológico, nas sociedades modernas os princípios de referência são igualdade e liberdade. Cada indivíduo é considerado uma unidade de referência fundamental, para si mesmo e para a sociedade. Como não há a ideia de estrutura social que prescreva os lugares sociais, a sociedade torna-se uma associação de indivíduos autônomos, constituindo-se desta maneira, como algo externo aos indivíduos ou até mesmo em oposição a eles. (Vieira & Stengel, 2012, p. 3).

Em *O Processo Civilizador. Formação do Estado e Civilização*, Elias (1993) também analisa elementos que fundamentam a transição da sociedade feudal-tradicional para a capitalista-moderna, demonstrando como a vida em sociedade foi modificando as noções de público e privado através de mecanismos de controle e, posteriormente, autocontrole, que foram minando dos espaços comuns determinados comportamentos, criando, assim, a vergonha e o sentimento de vergonha. O processo civilizatório



representaria, portanto, a lógica do progresso, organizada com base numa ordem social que, embora não tenha se constituído enquanto um processo racionalmente planejado, condicionou uma rede de ações individuais que influenciavam umas às outras.

A crescente regulação dos processos de comportamento e interação social dos indivíduos tinha como intuito estabelecer uma diferenciação social, acompanhada da divisão de funções interdependentes e interligadas. Para a manutenção desta nova estrutura, foi necessário um aparato de força e violência – que não ocorreu apenas de modo físico, mas, principalmente, simbólico. Giddens (1991) destaca que entre as principais instituições da modernidade estão o poder militar e a vigilância, onde o primeiro refere-se ao controle dos Estados-Nação sobre os meios de violência em contextos de guerra, e o segundo o controle sobre informações e supervisão das ações sociais. Isto é, “a vigilância se refere à supervisão das atividades da população súdita na esfera pública – embora sua importância como base do poder administrativo não se confine a esta esfera”. (Giddens, 1991, p. 69).

À medida que mais pessoas sintonizavam sua conduta com a de outras, a teia de ações teria que se organizar de forma sempre mais rigorosa e precisa, a fim de que cada ação individual desempenhasse uma função social. O indivíduo era compelido a regular a conduta de maneira mais diferenciada, uniforme e estável [...] A teia de relações tornou-se tão complexa e extensa, o esforço necessário para comportar-se “corretamente” [grifo do autor] dentro dela ficou tão grande que, além do autocontrole consciente do indivíduo, um ceco aparelho automático de autocontrole foi firmemente estabelecido. (Elias, 1993, p. 196).

A colonialidade pode ser compreendida como uma “lógica subjacente da fundação e do desdobramento da civilização ocidental desde o Renascimento até hoje”. (Mignolo (2017, p. 2). Isto porque o fim do processo de colonização territorial, no século XX, não findou a estrutura de relações econômicas e políticas estabelecidas entre centros de poder e periferias/semiperiferias mundiais desde o século XVI. Quijano e Wallerstein (1992) definem a colonialidade como um sistema hierárquico mundial que gerou a continuidade de uma ordem não apenas na dimensão político-econômica entre os territórios, mas, sobretudo, na dimensão cultural – responsável pela própria manutenção desta lógica.

A colonialidade é constituinte da modernidade (Mignolo, 2017), assim como do padrão mundial de poder capitalista (Quijano, 2014). Isto justifica o surgimento do processo de globalização enquanto uma “lógica linear e universal, que se pretende única em todo o



mundo” (Mignolo, 2017) ou a “intensificação das relações sociais em escala mundial” (Giddens, 1991, p. 76). O indivíduo ocidental moderno e a noção de individualismo criaram, progressivamente, um processo de colonialidade do ser, mediante uma imposição de normas e condutas sociais, através de mecanismos pedagógicos (colonialidade do poder e do saber).

La colonización del ser consiste nada menos que en generar la idea de que ciertos pueblos no forman parte de la historia, de que no son seres. Así, enterrados bajo la historia europea del descubrimiento están las historias, las experiencias y los relatos conceptuales silenciados de los que quedaron fuera de la categoría de seres humanos, de actores históricos y de entes racionales. (Mignolo, 2007, p. 30).

A colonialidade do ser permanece, hoje, ocultando a história dos que não se encaixam nos padrões dos sistema-mundo europeu/euro-norte-americano' capitalista/ patriarcal/ colonial/ moderno. (Grosfoguel, 2005). No mundo contemporâneo existe, no entanto – seja em sua parte “avançada”, “desenvolvida” ou “moderna” [grifos do autor], seja, no plano ideológico, que abriga sistemas de ideias e valores – “alguma outra coisa que nada tem a ver com o que se definiu diferencialmente como moderno” (Dumont, 1985, p. 31).

A resistência a esta cadeia de eventos relacionados surge dos próprios “subalternos”, ao reivindicarem seu direito de existir e viver de acordo com seus modos. Para Maldonado-Torres (2007, p. 160), são muitos os tipos de intervenção crítica dos colonizados, o que significa que “a orientação fundamental deste tipo de intervenção, e a atitude correspondente, referem-se ao espanto e ao grito da subjetividade viva e doadora diante da modernidade/ colonialidade, isto é, a própria atitude descolonial”. Suscitando o ímpeto por formas de ser, estar e existir, modelos de resistência surgem progressivamente à revelia das imposições coloniais, violentamente implantadas.

Coletivos: Resistência à colonialidade?

A utilização da denominação “Coletivo” tem sua origem no campo das Artes, constituindo um agrupamento de jovens artistas que desenvolviam trabalhos artísticos em um formato colaborativo e também para debater acerca de questões relacionadas ao circuito de arte. (Albuquerque, 2008). Além do formato coletivo, são identificadas, ainda, o formato de “Iniciativas Coletivas”, o que Cláudia Paim (2009, p. 12) conceitua como “projetos com autogestão de equipes de trabalho constituídas por artistas ou mistas, que se formam para um determinado fim e que não pretendem estabelecer vínculos como nos coletivos nem têm o propósito de formar um coletivo”.



Seja no formato de Coletivo ou a partir de Iniciativas coletivas, a idealização ou gestão dos eventos acontece de forma associativa, o que a autora chamou de “espaços autogestionados”, espaços estes que podem ser físicos (nas cidades) ou virtuais (*ciberespaço*). (Paim, 2009).

Coletivos: grupos de artistas que atuam de forma conjunta. Não hierárquicos, com criação coletiva de proposições artísticas ou não. Buscam realizar seus projetos pela união de esforços e compartilhamento de decisões. São flexíveis e ágeis e com capacidade de improvisação frente a desafios. Desburocratizados respondem com presteza às pressões que encontram. Desenvolvem ação e colaboração criativa. Apresentam rarefação da noção de autoria e uma relação dialética entre indivíduo e coletividade. Buscam atuar fora dos espaços de arte pré-existentes no circuito (tais como museus, centros culturais e galerias comerciais) aos quais questionam. Promovem situações de confluência entre reflexão e produção artística e questionamentos sobre o papel do artista (Paim, 2007, p. 1)

O agrupamento de artistas em seu formato não hierarquizado já era visualizado em várias cidades europeias e nos Estados Unidos, desde o século XX, influenciando o surgimento de agrupamentos na América Latina, na década de 1990. Alguns elementos sociohistóricos, políticos e econômicos ajudam a entender o contexto deste surgimento, como o fim das ditaduras e a ação de organizações de ação colaborativa; o sucateamento de instituições públicas que seriam responsáveis pelo setor cultural; e o surgimento de novas sociabilidades a partir das tecnologias comunicacionais e da globalização. (Paim, 2009). No século XXI, com a sociedade em rede e a democratização do uso da internet, estes movimentos têm se articulado em novos formatos e práticas – a expansão e o fortalecimento de Coletivos, o ativismo cultural e o ativismo virtual tem sido fenômenos representativos destes tempos na América Latina. (Oliveira, 2006; M. R. Mesquita, 2008; Paim, 2009).

No Brasil, há registros de atividade de Coletivos nas décadas de 1970 e 1980, muito embora um hiato arrefecesse as formações, que só reascenderiam nos anos 1990. (Rosas, 2006). Nesta década ocorreu a “expansão do papel do artista dentro do circuito de arte”. O evento *Panorama da Arte Brasileira 2001* parece ter sido o pontapé para o “surgimento” dos coletivos. (Albuquerque, 2008, p. 77).

Uma das características fundamentais que dão substancialidade aos Coletivos é a sua atuação questionadora acerca da própria “Arte”, utilizando-se do estético como meio, e não como fim, em espaços não institucionalizados e, portanto, não mercantilizados.



Desse modo, as ações destes grupos em comunidades carentes ou na mídia independente, cuja plateia se constitui de pessoas comuns do cotidiano, “se diluem em atos efêmeros, inefáveis, ou pontuais e marcantes, de acordo com a filosofia própria de cada grupo, mas que supostamente questionam todo um circuito instituído de *exposição-público-mercado* [grifo nosso]”. (Rosas, 2006, p. 29).

Neste cenário, o artista transcende a narrativa de produtor de obras artísticas, engajando-se, paralelamente, em atividades correlatas, como a organização de exposições e debates, atuando como curador ou crítico. Ao desenvolver projetos em parceria/colaboração com outros artistas, transcende, também, a própria condição do “ser artista” e do lugar que ocupa no sistema do circuito das artes, o que sugere o desejo de transformação de tal realidade (Albuquerque, 2008). A dimensão política na ação artística inaugurou a chamada “arte ativista”. (Rosas, 2006; L. A. Mesquita, 2008).

No caso específico dos coletivos de artistas da atualidade, entende-se que tais agenciamentos expressam uma postura crítica frente ao sistema das artes, atuando de forma propositiva em relação a ele. A compreensão parte da análise de características centrais observadas nesses agenciamentos, tais como: a constituição de organizações flexíveis e descentralizadas, a ênfase na troca de ideias, conhecimentos e experiências entre os integrantes, a opção pela criação em parceria, a realização de produções que avançam nos espaços do mundo e o investimento em trabalhos capazes de dialogar com o grande público. (Albuquerque, 2008, p. 78).

Para Albuquerque (2008, p. 78; 79), os coletivos brasileiros têm como característica, ainda, as intervenções no espaço urbano, com “produções que penetram nos espaços do mundo, inserindo-se em locais, objetos e situações consideradas não-artísticas e realizando-se *através* [grifo da autora] da vida social”. Assim, saindo de espaços fechados, os espaços da cidade tornam-se o cenário para as exposições, dialogando com os transeuntes, no intuito de lhes provocar para além dos automatismo do ir e vir cotidiano, funcionando como um “elemento desestabilizador” ou, nas palavras de Ernst Bloch, provocando a “rotação do olhar”.

Segundo Rosas (2006, p. 30), ao tomar espaços como a rua, o objetivo não paira sob o aspecto de “transformar esses lugares e coisas em ‘Arte’ [grifo do autor], mas diluir-se ‘com arte’ [grifo do autor] neles, resignificando-os, ressimbolizando-os, efetuando uma transformação subjetiva ou real, semiótica, mitopoiética, social ou ritual”. Os Coletivos atuam na contração da ordem social imposta, oferecendo alternativas de ser e estar no mundo, criando microuniversos de pertencimento social-identitário.



A crescente utilização e autodenominação de coletivos sugere um “novo” formato de mobilização social que se assemelha aos propósitos da corrente dos novos movimentos sociais em função de se constituírem como “manifestações apartidárias e autônomas” (Perez & Souza, 2017, p. 4). Embora tenha havido a expansão das formações e agrupamentos que levam a nomenclatura de “Coletivo”, as características das ações destes agrupamentos é marcada por características dos Novos e Novíssimos Movimentos Sociais, o que sugere um *continuum* que vem se remodelando socialmente, no tempo e no espaço.

Sob influência das ações coletivas no campo das Artes, não demorou muito para que outros agrupamentos absorvessem tanto o vocativo, quanto as características que marcavam estas (novas) práticas. Foram surgindo, assim, coletivos *urbanos*, *culturais*, *educativos*, *feministas*, apenas para citar alguns. Comunicam-se entre si e podem combinar mais de uma categoria. Realizam intervenções e eventos seja nos espaços concretos da cidade – ruas, avenidas, praças, espaços privados; ou no *ciberespaço*. Alguns apresentam solidez no tempo, outros sobrevivem de forma muito efêmera. Alguns seguem uma divisão de atribuições e hierarquias, outros são de caráter descentralizado e horizontal. Utilizam-se de ferramentas pedagógicas na comunicação/intervenção com seu público-alvo; interferem, portanto, na dinâmica social, educacional e cultural de determinada região. A temática e o(s) local(si) de atuação são intencionalmente escolhidos em função da base política da ação dos agrupamentos.

Um estudo realizado por Borelli e Aboboreira (2011, p. 165) realizou-se mediante uma cartografia dos Coletivos juvenis na cidade de São Paulo, revelando quatro categorias de agrupamentos:

- a) *coletivos extra institucionais que não buscam, ou mesmo recusam, conexões institucionais como justificativa para afirmação de independência e autonomia;*
- b) *coletivos que se articulam a diferentes ordens de institucionalidade – governamentais, não governamentais, religiosas, entre outras – recebem “auxílios” e participam de editais e concorrências para a realização de suas atividades político-culturais;*
- c) *coletivos juvenis que atuam de forma colaborativa, em suas regiões de pertença, usufruindo indiretamente da infraestrutura já conseguida por outros agrupamentos, por meio de projetos e serviços anteriormente aprovados, pelos mecanismos das políticas públicas voltadas à juventude;*
- d) *coletivos que já desfrutaram por um ou dois anos da verba pública e permanecem atuando, mesmo quando este vínculo deixou de ocorrer.*



A juventude é mola propulsora de tais práticas – categoria aqui não restrita apenas ao elemento etário, mas como um conjunto social diversificado, “perfilando-se diferentes culturas juvenis em função de diferentes pertenças de classe, diferentes situações econômicas, diferentes parcelas de poder, diferentes interesses, diferentes oportunidades ocupacionais etc.” (Pais, 1993, p. 23). As categorias juventudes e ações coletivas imbricam-se. Jovens atuaram a arena política nas cidades, com manifestações ao redor de todo o mundo; ao longo da história, a ação coletiva e os movimentos sociais desencadearam importantes marcos na transformação social.

Assim, “as ações culturais juvenis configuram-se como *lócus* privilegiado de ações políticas e que as dimensões estético-culturais tornam-se [sic] um indicador fundamental na compreensão de práticas políticas juvenis na contemporaneidade”. Da mesma forma, a cultura popular emerge não como um “bloco” de uma classe em relação a outra, mas “como espaço privilegiado de reflexão sobre as articulações entre cultura e política, entre o simbólico e o poder [...] enredado numa teia de conflitos, interesses e negociações (Borelli & Aboboreira, 2011, pp. 162-163).

Para Dussel (1997), a dominação centro-periferia aconteceria, antes de tudo, a nível cultural. Durante o colonialismo, o “centro” – imperial – projetou seus processos culturais às colônias, criando uma elite cultural – ilustrada – que reproduziria os valores da cultura do centro como únicos, negando, assim, a cultura de um Outro – o povo. É o que o autor chamou de “pedagogia da mediação ilustrada”. Dessa forma, a hierarquia que já havia entre colonizadores e colônias foi reproduzida a nível interno: a elite colonial alienada que tinha como objetivo alienar o povo; o colonizado foi pedagogicamente induzido a desvalorizar a cultura popular. O povo possui, portanto, três opositores: 1) o império; a 2) burguesia nacional; e 3) a burocracia. A negação desse sistema se daria em revoluções a nível, patriótico, social e cultural, respectivamente; a revolução cultural contemplaria o pedagógico, o cultural e a juventude.

O povo num certo nível está fora do sistema e, ao estar fora [grifo do autor] do sistema, está no futuro; ao estar no futuro é já o homem novo. O homem novo é o povo oprimido mas não, contudo, alienado e sim exterior ao sistema, sabendo que tem outras tradições, outra língua, outra cultura, que é considerada pela "cultura ilustrada" [grifo do autor] como incultura, como analfabetismo, como não-palavra, porque a cultura ilustrada não tem ouvidos para ouvir e, por isso, acredita que o Outro guarda silêncio; mas não, não está silencioso. (Dussel, 1997, p. 139).



Diante de tais elementos, é necessário questionar, tal qual Canclini (2009, pp. 171-172): “em que condições é possível, hoje, articular os conhecimentos disciplinares, globais, regionais e locais sobre a América Latina, para construir um saber que compatibilize as aproximações parciais e fundamente a ação sociocultural e política?”. O autor propõe que a resposta gira em torno de um processo de deslocamento “*da identidade à heterogeneidade e à interculturalidade* [grifos do autor]”, que sugestionam novos pertencimentos, “os lugares do local e do nacional”. Flórez-Flórez (2007) destaca a importância de compreender de que forma os movimentos latino-americanos têm articulado ações que construam um lugar próprio de enunciação, para além do essencialismo epistêmico que negou suas histórias locais e questionou a autenticidade de seus movimentos.

Reflexões Finais

Os discursos silenciados da modernidade – os processos de colonialidade – estão sendo revelados, questionados e desconstruídos, seja nas reflexões teórico-epistemológicas, seja nas práticas do cotidiano e do mundo da vida. A efervescência de agrupamentos intitulados Coletivos tem sido fenômeno de observação de pesquisadores em todo o mundo: marcados por características como horizontalidade, efemeridade e autonomia, a emergência desses agrupamentos deixa explícita não apenas a dimensão política imbuída em suas ações, mas apontam para um futuro diferente do que os povos latino-americanos foram imbuídos a ser. Novos nomes para formas não tão novas, ao se considerar o aflorar dos Coletivos como um *continuum* dos movimentos sociais que foram se modificando ao longo do tempo e do espaço, com novos contextos advindos, principalmente, das influências da sociedade urbano-digital. A atuação dos Coletivos é uma ação eminentemente problematizadora do espaço público, da cidade, das periferias, dos lugares de tensão, dos modelos opressores, dos processos históricos de colonialidade, enfim. Através da ocupação de espaços públicos – ação que lembra as históricas passeatas e manifestações que aconteciam em avenidas e ruas de cidades por todo o mundo – realizam intervenções a fim de levantar provocações e influenciar na transformação da ordem social imposta. São discursos e práticas de resistir aos binarismos modernos e suas contradições; de libertação dos moldes culturais impostos; de afirmar o direito de diferentes formas de existir e coabitar o mundo. São formas que demonstram, pois, que o giro decolonial já começou.



Referências

- Albuquerque, F. (2008). A atitude dos coletivos. *Revista Porto Arte*, Porto Alegre, v. 14 (24), 75-82.
- Borelli, S, H. L., Aboboreira, A. Teorias/metodologias: trajetos de investigação com coletivos juvenis em São Paulo/Brasil. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 1 (9), 161 - 172.
- Canclini, N. G. (2009). *Diferentes, desiguais, desconectados*. 3. Ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
- Coimbra, K. E. R. (2018). Arte e memória na ação cultural de coletivos teresinenses. *Anais do Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades. Democracia, memória e etnosaberes: Perspectivas transversais e interdisciplinares*, 7, Rio de Janeiro, RJ, Brasil: ANINTER-SH.
- Coimbra, K. E. R. (no prelo). Coletivos juvenis em Teresina. *Anais da Jornada Internacional de Políticas Públicas. Civilização ou Barbárie: O futuro da humanidade*, 9, São Luís, MA, Brasil: UFMA, 2019, julho.
- Dumont, L. (1985). *O individualismo. Uma perspectiva antropológica da ideologia moderna*. Rio de Janeiro: Rocco.
- Dussel, E. (1997) *Oito ensaios sobre cultura latino-americana e libertação*. São Paulo: Paulinas.
- Elias, N. (1993). *O processo civilizador. Volume 2: Formação do Estado e civilização*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Flórez-Flórez, J. (2007) Lectura no eurocéntrica de los movimientos sociales latinoamericanos. Las claves analíticas del proyecto modernidad/colonialidad. In Castro-Gómez, S., Grosfoguel, R. (Compiladores). *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Freire, A. C. (2015). Arte e instituição: Coletivos de artistas e crítica da arte em análise. *Anais do Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Arquivos, memórias, afetos*, 8, Goiânia, GO, Brasil. Recuperado de <<https://bit.ly/3pPeVNQ>>
- Giddens, A. (1991). *As consequências da modernidade*. São Paulo, Unesp.
- Grosfoguel, R. (2005). The Implications of subaltern epistemologies for global capitalism: transmodernity, border thinking and global coloniality. In Appelbaum R, P.; Robinson, W. I. (Eds.). *Critical Globalization Studies*. New York /London: Routledge.
- Hori, P. Os coletivos urbanos da cidade de São Paulo: Ações e reações. *Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em*



Planejamento Urbano e Regional, São Paulo, SP, Brasil, 12. Recuperado de <<https://bit.ly/3bhyhHz>>

Maldonado-Torres, N. (2007). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. In Castro-Gómez, S., Grosfoguel, R. (Compiladores). *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Maziviero, M. C., Almeida, E. (2017). Urbanismo insurgente: Ações recentes de coletivos urbanos ressignificando o espaço público na cidade de São Paulo. *Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional*, São Paulo, SP, Brasil, 12. Recuperado de <<https://bit.ly/3oicHWY>>

Mesquita, L. A. (2008) *Insurgências poéticas. Arte ativista e ação coletiva (1990 – 2000)*. (Dissertação de Mestrado). Departamento de História, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Mesquita, M. R. (2008) Cultura e política: A experiência dos coletivos de cultura no movimento estudantil. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 81, 179-207.

Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la oposición decolonial*. Gedisa: Barcelona.

Mignolo, W. (2017). Colonialidade o lado mais escuro da modernidade. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 32(94),1-18.

Oliveira, L. M. B. (2006). *Corpos indisciplinados. Ação cultural em tempos de biopolítica*. (Tese de Doutorado). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Paim, C. T. (2007). Práticas coletivas de artistas na América Latina contemporânea. *Anais do Annual ILASSA Student Conference on Latin America*, 27, Austin: University of Texas. Recuperado de <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2007/paim.pdf>

Paim, C. T. (2009). *Coletivos e iniciativas coletivas: modos de fazer na América Latina Contemporânea* (Tese de Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil.

Pais, J. M. (1993). *Culturas juvenis*. Lisboa: INCM.

Perez, O. C., Souza, B. M. (2017). Velhos, novos ou novíssimos movimentos sociais? As pautas e práticas dos coletivos. *Anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais*, ANPOCS Caxambú, MG, Brasil, 41. Recuperado de <<https://bit.ly/2KVAZI0>>



Quijano, A., Wallerstein, I. (1992). Americanity as a concept, or the Americas in the modern world-system. in *International Social Science Journal*, Paris: UNESCO, 134, noviembre, 549-447.

Quijano, A. (2014). *Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/ descolonialidad del poder*. Buenos Aires: CLACSO.

Rosas, R. (2006). Notas sobre o coletivismo artístico no Brasil. *Rua*, Campinas, 12, 27-35.

Sant'anna, S. M. P., Marcondes, G. & Miranda, A. C. F. A. (2017). Arte e política: A consolidação da arte como agente na esfera pública. *Sociologia & Antropologia*, Rio de Janeiro, 07(03), 825–849.

Souza, R. M. (2006). *O discurso do protagonismo juvenil*. (Tese de Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Vieira, E. D., Stengel, M. (2012) Individualismo, liberdade e insegurança na pós-modernidade. *Estudos Contemporâneos da Subjetividade*, Rio de Janeiro, 2(2), 1-13.



“Hacia un horizonte decolonial: Acción colectiva e identidad de la Red Federal de Afroargentinos/as del Tronco Colonial”.

Guadalupe Román¹

Resumen

En el presente trabajo se propone analizar una propuesta decolonial, que a partir del año 2013, surgió en la Argentina con el objetivo de trabajar por el reconocimiento y la reivindicación de los pueblos afrodescendientes de nuestro país. Este proyecto colectivo se autodenomina desde entonces, “Red Federal de Afroargentinos/as del Tronco Colonial”, este último término “*tronco colonial*” se refiere a que sus integrantes se reconocen como quinta o sexta generación de africanos y africanas esclavizados durante la etapa colonial.

En esta oportunidad se va desarrollar a modo de introducción de futuras investigaciones, los repertorios de acción colectiva que lleva a cabo este movimiento federal, social y cultural tanto a nivel local y nacional, de manera que puedan reconocerse las experiencias políticas de descolonización que surgen como consecuencia de la matriz colonial del poder, a la que alude Walter Dignolo. En este sentido, nuestro interés radica en contribuir cómo el *hacer y el pensar* decolonial puede generar acciones transformadoras en las realidades particulares de cada territorio, y cómo estas experiencias que se encuentran en marcha pueden generar proyectos más amplios de liberación e integración de nuestros pueblos latinoamericanos.

Palabras clave

Decolonialidad; Afroargentinos/as; Acción colectiva; Organizaciones sociales; Movimiento social

A modo de introducción

Durante fines de la década del 80 y principios de la década del 90, asistimos en Argentina al advenimiento de nuevos movimientos sociales, como consecuencia del fin de las dictaduras militares no sólo en este país sino en toda América Latina. Los movimientos de campesinos, afrodescendientes, indígenas, obreros, trabajadores/as, ambientalistas, entre otros; definieron y propiciaron la construcción de un *campo de batalla* en este territorio históricamente de disputa, con el objetivo de marcar y definir la agenda pública del escenario local, regional y mundial.



Este resurgir permitió que nuevos protagonistas se apropien del espacio público y desarrollen nuevas demandas y problemáticas y, al mismo tiempo, implementen nuevos repertorios de acción colectiva. Este renacer de los movimientos sociales coincidió –y no de manera casual- con una corriente de pensamiento latinoamericano de un grupo transnacional de intelectuales, que desde los años 70 y, con especial incidencia a partir de los 90, propusieron otras formas de interpretar la modernidad surgida a fines del siglo XV en lo que se denominó “América”.

“Entre las personalidades más influyentes de este “giro decolonial” se encuentran el filósofo argentino Enrique Dussel, el sociólogo peruano Anibal Quijano, el semiólogo argentino Walter D. Mignolo, el ya citado antropólogo colombiano Arturo Escobar, el sociólogo venezolano Edgardo Lander, el filósofo portorriqueño Nelson Maldonado-Torres, el filósofo colombiano Santiago Castro- Gómez, el sociólogo portorriqueño Ramón Grosfoguel, el antropólogo venezolano Fernando Coronil o la lingüista norteamericana Catherine Walsh, entre otros”. (Sempere y Román, 2019,p.142).

Como señalamos anteriormente, este Grupo Decolonial incorporó otras categorías para analizar y explicar la modernidad, el colonialismo y etnocentrismo impuesto desde la llegada de los españoles y portugueses a este continente. Como señala Walter Mignolo,

“la opción descolonial se diferencia de las posiciones posmodernas pues se trata de dos trayectorias distintas en la crítica de la modernidad europea (postmodernidad, posestructuralismo) y la otra, las críticas descoloniales que provienen desde distintas historias locales y distintas maneras de experimentar la invasión o la importación (por las élites locales adscriptas a y a beneficiarias de la modernidad occidental) de Europa al resto del mundo. La opción descolonial designa, entonces, la variedad (múltiple, plural) de trayectorias descoloniales”. (Mignolo, 2010, p.10)

En este sentido, para referirnos a este movimiento federal, cultural, político, ético, epistémico llamado “Red Federal de Afroargentinos/as del Tronco Colonial” vamos a realizarlo desde ésta perspectiva, que pone el acento en aquellos que fueron y siguen siendo “las víctimas de la modernidad” y, que por tal motivo, sufrieron la negación y el olvido de sus historias, sus memorias, sus propias identidades. Para comprender por qué y cómo surgió la necesidad de ésta organización de hermanarse en una red, en una primera instancia abordaremos los componentes ideológicos que atravesaron al Estado nacional argentino a fines del siglo XIX durante su consolidación; componentes que cimentaron un discurso lineal, universalista, occidental acerca de nuestro pasado y, al mismo tiempo, casi de antemano determinaron el futuro de todos los que habitaban el territorio en ese momento: mestizos, gauchos, indígenas, africanos/as.



Por otro lado, en una segunda instancia se analizará el marco legislativo actual con respecto a los derechos de los afrodescendientes ya que de este modo se podrá evaluar de qué manera el Estado nacional argentino impulsó políticas por el reconocimiento étnico tendientes a “reparar” las injusticias generados por la negación del aporte de la identidad afro a la cultura argentina.

Por último, se desarrollaran los repertorios de acción colectiva que vienen implementando desde sus inicios la Red Federal de Afroargentinos/as del Tronco Colonial para visibilizar su lucha y expandir sus voces hacia los distintos rincones de este nuestro país.

El mito de la nación blanca

¿Dónde están los negros/as en la Argentina? ¿Dónde viven? ¿Dónde se “ocultan”? ¿Están organizados? ¿Cuántos quedan? Éstas son algunas de las preguntas que son recurrentes cuando la negritud comienza a visibilizarse y a generar pequeñas rupturas en los espacios cotidianos donde transitamos, ya sea una escuela, en la Universidad, en un museo, en el hall de un municipio, en una sala de la Legislatura, una plaza... Es que en las últimas décadas ésta nación que enfatizó la necesidad de consolidar un discurso lineal, eurocéntrico y etnocentrista comenzó a tener sus propias fisuras. Sin embargo, a pesar de los avances de las distintas organizaciones de afrodescendientes que comenzaron a surgir no sólo en Argentina sino en toda la región, las voces que emergen de esos cuerpos que aún poseen las marcas de “la herida colonial” - en palabras de Walter Mignolo- todavía siguen padeciendo el olvido, el silencio de sus propias historias, de sus propias memorias. Y esto no es casual, data de una larga tradición histórica que pretendemos abordar en las siguientes líneas.

Eduardo Lander (2000) afirma que, “la conquista ibérica del continente americano es el momento fundante de los dos procesos que articuladamente conforman la historia posterior: la modernidad y la organización colonial del mundo”. Desde ese momento, se definió el lugar y el espacio para cada grupo social y, al mismo tiempo, se jerarquizaron los conocimientos y saberes válidos que luego se difundirían y articularían en una narrativa universal. Desde allí, la colonialidad del poder, término acuñado por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, configuró una nueva identidad entorno a la idea de “raza”. En este sentido, “(...) raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad. En otros términos, en el modo básico de clasificación social universal de la población mundial”, (Quijano, 2014, p.780) Con la llegada de los



españoles, América Latina se configuró como un espacio atravesado por las relaciones coloniales de poder, y desde allí, se ejerció la dominación en todos los ámbitos y esferas de esta nueva sociedad. Los *otros* que no pertenecían a los estratos más altos como los europeos, pasaron a ser considerados inferiores, hasta el punto de dudar si tenían “alma” y por ende, si podían denominarse humanos. Aníbal Quijano señala al respecto:

“como los vencedores fueron adquiriendo durante la Colonia la identidad de ‘europeos’ y ‘blancos’, las otras identidades fueron asociadas también ante todo al color de la piel, ‘negros’, ‘indios’ y ‘mestizos’. Pero en esas nuevas identidades quedó fijada, igualmente, la idea de su desigualdad, concretamente inferioridad, cultural, si se quiere ‘étnica’”. (Quijano, 2014, p.759).

En consonancia con los postulados de Quijano, Walter Mignolo señala, “el discurso imperial que pregona la modernidad, clasifica y degrada todo aquello que es necesario ‘transformar’ para que la modernidad no se detenga. De ahí surge la colonialidad” (Mignolo, 2014, p.105). Los sujetos colonizados se convierten de esta manera en los culpables de que el progreso y la modernidad no se expandan a todos los rincones y espacios de estas tierras. Por lo tanto, adoctrinar, educar, civilizar es la tarea que les corresponderá a los que están del otro lado de “ese mundo” ocioso, vago, desobediente.

Más tarde, este proyecto occidental de difusión y consolidación del pensamiento colonialista tuvo su segundo momento, fue a fines del siglo XIX con la formación de los estados nacionales. El miedo al salvajismo se convirtió en el arma de los letrados, lo que derivó que el *ser* argentino se piense por fuera de su lugar, de su “hábitat”, su paisaje cultural; y para ello, fue necesario crear y fundar un nuevo modo de *estar* a través de ritos y símbolos que asegurasen la fundante identidad. El pensamiento imperante de esa época basado en la dicotomía “civilización o barbarie” se constituyó en el proyecto hegemónico y definió una identidad nacional alejada del mestizaje cultural característico de nuestro país y de la región, donde coexistían una heterogeneidad de etnias, culturas, colores, rostros, voces, cuerpos, subjetividades, lenguajes, saberes que se pensaban y se constituían por fuera de la matriz colonial del poder.

El Estado nacional argentino reforzó esta imagen en esta nueva nación, que debía erigirse blanca, occidental, moderna, clasista; por lo tanto, la idea de superioridad a partir del pensamiento eurocentrista cobra el mismo sentido que el de sus inicios: “civilizar” y dominar a los inferiores, los primitivos, bárbaros, incultos. Tal como señala Rita Segato, en Argentina brotó el “terror étnico”, es decir:



el “patrullaje homogeneizador por parte de las instituciones y el trabajo estratégico de una elite portuaria e ideológicamente euro-céntrica en el control del Estado para <nacionalizar> una nación percibida como amenazadoramente múltiple en pueblos, y extranjera. Nacionalizar significó aquí moldearla en una especie de ‘etnicidad ficticia’ férreamente uniformizada. El sujeto nacional tuvo que modelarse en un perfil neutro, vaciado de toda particularidad. ‘Civilización’ fue aquí definida como ‘neutralidad étnica, y ‘barbarie’ como su antagónico otro interior en constante retirada y pugna por retorno”. (Segato, 2007, p. 31)

Esas elites, gracias a la inserción de América Latina al mercado mundial capitalista como productora de bienes primarios, vieron acrecentar sus fortunas a través del modelo agroexportador a fines del siglo XIX. Esta “supremacía” económica les permitió legitimar esta diferenciación social fundamentalmente apoyada en esquemas racistas y patriarcales. Para lograr la homogeneización de los habitantes de este territorio, se retomó el imaginario social fundado por los conquistadores; quienes no se adaptaban a esa imagen del hombre blanco, clasista, moderno, occidental, cristiano, fueron marginados, olvidados, silenciados. Pero al mismo tiempo, esos sectores a quienes les negaron la posibilidad de ser *otros*, pasaron a convertirse en ciudadanos argentinos, pero al igual que durante la etapa colonial, quedaron en una situación diferencial con respecto a los grupos dominantes. Esto conllevó a que estos sectores se convirtieran en clase subalterna de una nación que pretendía ser homogénea. Como señala Rita Segato,

“El estado argentino condicionó el acceso a la ciudadanía plena, a la comunidad conciudadana, a partir de un principio exactamente opuesto: todas las personas étnicamente marcadas, sea por la pertenencia a una etnia derrotada (los indios y los africanos) o a un pueblo inmigrante (italianos, judíos, españoles, polacos, rusos, sirios y libaneses, alemanes, ingleses o tantos más) fueron convocadas o presionadas para desplazarse de sus categorías de origen para, solamente entonces, poder ejercer confortablemente la nacionalidad. La ecualización cultural, a través de un proceso de producción de neutralidad étnica, fue percibida como una condición para el acceso a la ciudadanía” (Segato, 2007, p.58).

De esta manera, la colonialidad del poder pretendió la desintegración de los pueblos que no se adaptaban a esa imagen europea/occidental, lo que condujo a que los pueblos indígenas y africanos se los reduzca a la pobreza y a la marginación; y al mismo tiempo, al olvido y al silencio.



Por ésta razón, es que los extranjeros/as cada vez que visitan o recorren nuestro país se siguen preguntando, ¿hubo presencia africana en éste país? ¿dónde están los negros y negras? ¿se murieron todos en las guerras? Es difícil encontrar huellas africanas en los espacios que habitamos comúnmente porque todavía esa estructura en la que se cimentó el estado nacional argentino basado en un esquema racista y patriarcal no se ha deconstruido ni descolonizado. Por el contrario, al igual que en la etapa colonial, la clasificación de los ciudadanos/as se sigue realizando de acuerdo al color de piel. Y esto no sólo implica una negación de la identidad nacional y latinoamericana sino también una negación de la posibilidad de que los *otros*, mestizos, negros, indígenas puedan adquirir también derechos.

¿Afro reparaciones?

¿De qué manera el estado nacional argentino comenzó a incidir para visibilizar el aporte de los afrodescendientes a la cultura argentina? ¿Cómo legisló o intentó acoger la diferencia a partir de los reclamos de las comunidades afro?

A pesar de que los movimientos negros tomaron fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX principalmente en Estados Unidos y en África durante los procesos de descolonización, en nuestro país en materia legislativa en cuanto al reconocimiento de la presencia de afrodescendientes comenzó a tomar mayor visibilización a principios de este siglo. Si bien en 1968 la República Argentina ratificó a través de la Ley Nacional N°17222² a la *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial* suscripta en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), recién a partir del año 2001 comenzó a implementar políticas públicas de reconocimiento cultural sobre los derechos de la comunidad afrodescendiente. Ese mismo año el Estado argentino participó de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia celebrada en Durban, Sudáfrica; iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de la Tercera Década para el Combate del Racismo y la Discriminación Racial en pro de la lucha contra toda forma de intolerancia y discriminación. Esta conferencia fue de suma importancia ya que a partir de allí, se legitima el término “afrodescendientes” para designar “a los descendientes de las poblaciones africanas que fueron víctimas de la esclavización transatlántica”. Asimismo, éste evento de carácter mundial fue significativo para la Argentina, ya que según el INADI, “el compromiso asumido en la Conferencia de Durban luego daría lugar, (...) al documento titulado Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación: la discriminación en Argentina Diagnóstico y



Propuestas” (Decreto N° 1086/2005) (INADI, 2016, p.51), teniendo este organismo estatal la responsabilidad de promover las acciones que resulten necesarias para abordar y efectivizar las recomendaciones del plan.

En el año 2005 se llevó a cabo la “Prueba piloto de autopercepción de afrodescendientes”. El relevamiento se hizo con la asesoría técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC (En Santa Fe el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos IPEC), la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el asesoramiento de instituciones Africanas y de Afrodescendientes (Miriam Gomes, por la Comunidad Caboverdiana y Lucía Molina por la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana). La Prueba Piloto se hizo en 600 casas, en Monserrat (Buenos Aires) y 600 casas en Santa Rosa de Lima (Santa Fe) desde el día 6 de abril hasta los primeros días de mayo de 2005. El porcentaje de personas que se autoidentificó afrodescendiente fue de aproximadamente un 4% en ambas jurisdicciones. Esto conllevó a que en el Censo Nacional de Población de 2010 se incorporó la pregunta sobre afrodescendencia. “El censo arrojó un total de 149.493 personas que se autorreconocen como afrodescendientes,90 lo cual representa un 0,4 % de la población total. La mayor concentración poblacional se ubica en el rango etario de 15 a 64 años, representando el 67,9 % del total. Esto significa que el grueso de la población afrodescendiente de Argentina se encuentra en edad de trabajar (...) En su conjunto, más del 70 % de los y las afrodescendientes se concentran en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe”. (INADI, 2017 p 55)

Posteriormente a la prueba piloto de autopercepción de afrodescendientes, el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionaron el 1° de noviembre de 2006 la Ley N° 26.162 de reconocimiento de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Según ésta ley, fue promulgada para “recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de la jurisdicción de la República Argentina, que alegaren ser víctimas de violaciones por parte del Estado nacional (...)”.

En el año 2010 se firmó el Decreto 1584/2010 por el cual el 12 de octubre dejó de llamarse Día de la Raza para pasar a denominarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este cambio fue posible gracias a la lucha de los pueblos indígenas y afroamericanos ya que la anterior denominación significaba una continuidad respecto del pasado colonial.



Por otro lado, en 2012 se creó el Programa Afrodescendientes dentro de la Dirección Nacional de promoción de los Derechos Culturales y Diversidad Cultural del entonces Ministerio de Cultura de la Nación.

Otra de las políticas trascendentales para el movimiento negro en Argentina fue la sanción de la Ley N° 26.852 que declara el 8 de noviembre como el Día Nacional de los/as Afroargentinos y de la Cultura Afro. El 24 de abril de 2013 el Senado determinó el 8 de noviembre como fecha para reivindicar la presencia de los africanos y africanas en las luchas por la independencia y en la identidad nacional. En el primer artículo de dicha ley así lo menciona: “Institúyese el día 8 de noviembre como ‘Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro’ en conmemoración de María Remedios del Valle, a quien el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla”. Por primera vez, una mujer, negra y argentina es reconocida por su valentía y honor en los espacios blancos de poder. ¿Quién podría imaginar que nuestro país iba a tener como “Madre de la Patria” una mujer afroargentina como parte de su memoria y de su legado identitario?

Por último, la Asamblea General de la ONU bajo la Resolución 68/237 proclamó “2015-2024 el Decenio Internacional para los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, para las personas de ascendencia africana y descendientes de personas esclavizadas; con el objetivo de “ la necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad.” En el año 2017 Argentina adhirió al Decenio Internacional de los Afrodescendientes y se encomendó a la Secretaría de Derechos Humanos elaborar un programa nacional para la aplicación del decenio (Decreto 658/2017).

Sin embargo, a pesar de que en los últimos años existe un marco normativo y jurídico que reconoce la raíz africana como parte del entramado social y cultural de este territorio, esas leyes no han significado un verdadero cambio radical sobre la vida de las personas que se autoreconocen afrodescendientes. Por un lado, no existe una reparación económica hacia los descendientes de los esclavizados/as por el daño histórico que han padecido tras décadas de negacionismo y, a su vez, por las secuelas que ha dejado el colonialismo y la esclavitud sobre sus cuerpos y mentes. Por otro lado, a pesar de que existen ciertos organismos estatales como el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los programas nacionales y los recursos económicos que



se disponen para su debida difusión, formación en los todos los ámbitos de la sociedad son escasos y, en algunas instancias, nulos.

A su vez, es preciso mencionar que éstas leyes no fueron implementadas de forma aislada, éste avance en materia legislativa fue gracias a la lucha incansable de diferentes organizaciones y colectivos de afroargentinos/as y migrantes que han ocupado el espacio público y han disputado el poder en todos los distintos espacios donde la matriz colonial del poder sigue jerarquizando las relaciones entre los seres humanos.

A continuación, se analizará de qué manera una reciente propuesta decolonial, como la Red Federal de Afroargentinos/as del Tronco Colonial, ha logrado posicionarse frente al espacio nacional proponiendo nuevas formas de acción colectiva –desde una perspectiva afroepistemológica como sostienen sus integrantes - para generar cambios a lo largo y a lo ancho de éste país.

La Red Federal de Afroargentinos/as del Tronco Colonial

En las últimas décadas emergieron nuevos movimientos sociales con el objetivo de visibilizar sus reclamos, demandas, entre ellos, podemos destacar movimientos étnicos, de clases, de género. Surgen, según Ludger Mees, nuevos movimientos sociales organizados a través de redes informales, descentralizadas y escasamente burocratizadas; motivados por valores *postmaterialistas* (paz, ecología, libertad sexual, derechos de la mujer, entre otros) y en contra de los nuevos riesgos que presenta la modernización² (Mees, 1998). La búsqueda de respuestas y de reconocimiento llevó a que distintas organizaciones ocupen el espacio público para desnaturalizar prácticas socio- culturales arraigadas en nuestra sociedad. Se hicieron presentes a través de distintos repertorios de acción colectiva para que sus reclamos no sólo sean adjudicados a una “*minoría*” que se manifiesta y defiende sus derechos sino que pretende responsabilizar y concientizar a toda la comunidad de la discriminación y las diferencias que generan en la cotidianeidad.

A pesar de que asistimos a grandes cambios significativos que se vienen produciendo en América Latina y en especial en Argentina en materia de derechos jurídicos, estas organizaciones siguen en la búsqueda de desterrar los estereotipos que estructuran la sociedad que sólo acentúan las diferencias bajo un discurso racista, eurocéntrico, patriarcal. El reconocimiento histórico y la redistribución (material) de manera complementaria y no excluyente siguen siendo banderas de estas organizaciones que velan por ampliar sus derechos en torno a la igualdad y el respeto.



Por otra parte, para abordar de qué manera la Red Federal de Afroargentinos/as del Tronco Colonial irrumpe en el espacio nacional generando nuevos discursos sobre el pasado colonial y sobre su continuidad en la actualidad; se trabajará a partir del concepto de acción colectiva contenciosa desarrollado por Charles Tilly, quien considera que se trata de acciones que realiza un grupo de personas que comparten los mismos objetivos, que no actúan de manera rutinaria a través de medios de acción distintos a los cotidianos. Estas luchas contenciosas que llevan a cabo quienes integran estas organizaciones implican posiciones de intereses cuando deben reclamar para hacer visibles sus demandas. Asimismo estas acciones se expresan a través de un repertorio de acción que consisten en mecanismos de interacción hacia dentro y hacia afuera del colectivo, formas de luchas, métodos de comunicación, y expresiones públicas, etc. Las mismas son aprehendidas a través del tiempo y otras son inventadas y/o adecuadas por el mismo colectivo.

Antes de abordar los repertorios de acción colectiva llevados a cabo por ésta red, es necesario explicar la denominación *tronco colonial*, ya que ésta designación no se de manera aislada, sino que responde a una posición ideológica y política de ésta asociación para explicar desde qué postura abordan la cuestión de su descendencia. Con respecto a éste término, fue acuñado por la Asociación Misibamba fundada en el año 2008 en Merlo (Provincia de Buenos Aires) y alude a que éstas familias que integran la red se reconocen como quinta y sexta generación de los esclavizados/as durante la etapa colonial. Y esto no es menor, ya que implica una nueva construcción identitaria definida desde los propios cuerpos que se piensan a partir de sus historias, su ancestralidad, sus familias. La palabra “tronco” implica un lazo con sus propias raíces, como señala Carlos Lamadrid –integrantes de Asociación Misibamba-:

“consideramos necesario y oportuno para recordar esa nefasta época y porque nuestra historia como afroargentinos comenzó allí, en la época colonial pues, a pesar de todo, orgullosamente somos sus descendientes. Conocemos sus historias, nuestra historia, su lucha tapada con un manto de docilidad y que hoy continuamos, y sus resistencias, por eso nuestra valoración y nuestra defensa”. (Lamadrid, 2013, p. 67)

Por otro lado, en cuanto a la red, ¿cuándo se institucionaliza ésta asociación de organizaciones afro? El recorrido de la red es arduo y constante desde hace seis años. La fecha que se instituyó como el inicio de este gran espacio de militancia y activismo fue a partir de la sanción de la Ley Nro. 26852 que declara el Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro. Pero algunas organizaciones de las que hoy forman



parte de este movimiento ya venían trabajando de manera conjunta años anteriores, este es el caso de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana “Mario Luis López” (CCIAA) de la ciudad de Santa Fe, Mesa Afro de Córdoba y Asociación Misibamba de Buenos Aires. Organizaciones que a su vez, participaron de manera directa narrando el proyecto de ley que proclama el Día de los Afroargentinos y de la Cultura Afro.

Una fecha clave para éstas instituciones fue cuando el 3 de diciembre de 2009, la CCIAA logró a través de la Ordenanza Municipal 11649 del 3/12/2009 la modificación del nombre del “Paseo de las Dos Culturas” por “Paseo de las Tres Culturas”, ubicado en el casco histórico de la ciudad de Santa Fe. Este reconocimiento fue significativo para la comunidad afrosantafesina y afroargentina porque hasta el momento se hacía mención a los pueblos originarios y a los europeos como grupos que confluyeron en nuestro mestizaje cultural. Por tal motivo, dada la relevancia de esta reparación histórica, la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana “Mario Luis López” proclamó al 17 de abril “Día del Afroargentino del Tronco Colonial”. Carlos Lamadrid señala: “A raíz de lo sucedido y considerando su importancia de cara al futuro, institucionalmente consensuamos que como somos afroargentinos, nuestro objetivo primordial es la reivindicación de los abuelos, nuestros abuelos y porque nuestras coincidencias en el tiempo pasado se daban; decidimos comenzar a autodenominarnos “afroargentinos del tronco colonial” (Lamadrid, 2013, p. 68).

Desde ese momento, los vínculos entre quienes conformaban las agrupaciones, alrededor de treinta personas, se fueron haciendo cada vez más fuerte. Comenzaron a acercarse, al mismo tiempo, otras personas de diferentes provincias que ya se reconocían afrodescendiente pero a pesar de algunas disposiciones legales, en la práctica la visibilización afro estaba ausente. Por ello, necesitaron aunar esfuerzos con otras experiencias que ya se venían gestando en el territorio. De esa manera, afrochaqueños/as, afrocorrentinos/as, afrosantiagües fueron acercándose a las instituciones para conocer cuáles eran las formas de acción colectiva que venían produciendo en sus espacios geográficos. Fue así que a ésta red se unieron dos organizaciones: A.FRO.CH de Chaco) y Cofradía de San Baltazar del Barrio Camba Cuá de Corrientes (organización que en la actualidad ya no participa de la red). La última organización en integrarse en el año 2017 fue “Entre Afros”, donde su ámbito de visibilización de ésta problemática se emplaza en la provincia de Entre Ríos. De esta manera, en la actualidad, esta red está constituida por las siguientes agrupaciones del país, Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana “Mario Luis López” (Santa Fe), Asociación



Misibamba Comunidad Afroargentina de Buenos Aires (Merlo - Ciudad Evita, Buenos Aires), (Corrientes), Mesa Afro Oficial (Córdoba); A. AFRO:CH (Chaco) y Entre Afros (Entre Ríos).

A pesar de que la red federal no cuenta con un estatuto propio debido a que todavía se encuentra en proceso de escritura, los/las integrantes han definido en las diversas reuniones en la que se han congregado durante estos años que los fines de este espacio de encuentro y fortalecimiento de sus vínculos, tanto dentro y fuera de Argentina son: a) “Fomentar y difundir nuestras raíces culturales, promoviendo el reconocimiento de los pueblos africanos esclavizados durante el período colonial en Argentina; b) Desarrollar, promover y difundir todo tipo de proyectos y programas educativos y de cooperación a nivel nacional e internacional; c) Fomentar y promover la colaboración y participación en proyectos, programas, reuniones, congresos, seminarios e intercambios, a nivel nacional e internacional, con cualquier tipo de entidades que tengan fines similares, análogos o idénticos a los de la red; d) Promover el desarrollo de las comunidades y de las personas indoafroamericanas, favoreciendo el conocimiento de sus derechos en pos de construir sociedades con igualdad de oportunidades para todos y todas”.

Para lograr dichos objetivos, la red desarrolla cuatro encuentros anuales en las diferentes provincias que componen ésta organización. Las fechas son emblemáticas para sus miembros ya que las efemérides nacionales todavía responden a un discurso blanco, elitista, clasista y, por lo tanto, romper con esa narrativa lineal implica proponer otros relatos y miradas acerca de nuestro pasado y de nuestra identidad. Esas fechas que conmemora la red y en la cual se reúnen todos/todas los/las integrantes de las diferentes organizaciones son, en primer lugar, el “Día de los Afroargentinos/as del Tronco Colonial”, que se celebra todos los 17 de abril debido al cambio de denominación del “Paseo de las Dos Culturas” por “Paseo de las Tres Culturas”, gracias a los esfuerzos de la CCIAA. Desde el año 2011 se realiza el Encuentro “Tambor Abuelo” y ya lleva ocho ediciones de manera interrumpida en la ciudad de Santa Fe. Desde que se integró la agrupación “Entre Afros” en la red, ésta propuesta se lleva a cabo en Santa Fe y Paraná (Entre Ríos). Durante los días de encuentro se generan charlas educativas para la comunidad en diferentes espacios: escuelas de nivel secundario, Universidades, institutos superiores, museos; con el fin de continuar debatiendo y desarrollando propuestas en relación a políticas culturales que favorezcan procesos de resguardo y promoción de la cultura afroargentina, en el marco de la promoción y ampliación de derechos. Además de las charlas que llevan adelante los afroargentinos/as, también



vienen realizando diversos talleres donde resignifican las raíces culturales afro, entre ellos, candombe litoraleño, danzas afro, talleres de comunicación sobre racismo, discriminación con el objetivo de visibilizar situaciones que reproducen estereotipos y prejuicios raciales; conversatorio sobre literatura afroargentina; talleres de género y feminismo negro; entre otros. Esto genera, hacia dentro de la red una solidaridad e identidad que profundiza y fortalece los vínculos afectivos, familiares, cooperativos entre quienes se convocan para visibilizar sus demandas colectiva; y hacia afuera conducen a pensar la conformación de la identidad latinoamericana y, al mismo tiempo, la necesidad de aunar esfuerzos para defender y luchar por los derechos que les corresponden a todos/as sin distinción de clase, género y raza, es decir: salud, educación y trabajo.

La segunda fecha donde se realizan diversas actividades culturales y educativas es el 25 de Julio que corresponde al “Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Africana y de la Diáspora”. Ésta efeméride se celebra en la provincia de Córdoba y éste año ya celebró su quinto encuentro. Esta jornada reúne mujeres negras no sólo de Argentina y pertenecientes a la red sino que también congrega a mujeres afro de la región.

La tercera actividad anual se lleva a cabo el 8 de noviembre, “Día de los Afroargentinos/as y de la Cultura Afro” en el cual la red se reúne en Ciudad Evita (Buenos Aires) y construye nuevas actividades y talleres para la comunidad. Este año, la Asociación Misibamba –quien se encarga de generar las acciones para posibilitar ese congreso- ya gestó su quinto encuentro.

Por último, el 6 de enero se celebra el Día del Afrochaqueño/a y la cultura afro litoraleña en conmemoración a la festividad de San Baltasar. La Ley 7685 sancionada el 28 de octubre de 2015 en Chaco, otorgó el reconocimiento a los afrodescendientes de este territorio, y a partir de ahí todos los 6 de enero las calles de Resistencia y Corrientes se convierten en una fiesta popular para reivindicar a los africanos/as esclavizados durante la época colonial.

Estos encuentros anuales que generan un intenso trabajo de producción y construcción de talleres sobre derechos humanos, seminarios, charlas y conferencias en instituciones educativas y culturales, festivales de arte (que incluyen música, danza, literatura, conversatorios); también promueve lazos y vínculos horizontales entre quienes integran la red. Ya que en esas actividades colectivas se profundizan los diálogos e intercambios entre los afroargentinos/as, quienes se reúnen para generar discusiones y debate sobre



la divulgación y promoción de sus derechos, siempre atendiendo al desarrollo de la interculturalidad en sus espacios territoriales.

Consideraciones finales

Como mencionamos anteriormente, este trabajo pretende ser una introducción sobre el proyecto político, social, educativo y cultural que se viene elaborando en Argentina, para conocer que existen otras formas de irrumpir el espacio y desafiar la colonialidad; sobre todo desde perspectivas más igualitarias, solidarias, afectivas, inclusivas.

Entendemos que a pesar de que la Red Federal de Afroargentinos/as del Tronco Colonial presenta dificultades a la hora formalizar sus objetivos y delinear acciones conjuntas con el Estado nacional argentino frente a la falta de recursos económicos por parte de los organismos estatales que no fortalecen los programas institucionales que existen y están regulados por ley; su presencia en los ámbitos de gestión es disruptiva ya que en el país más blanqueado de América Latina se animan a proponer una nueva forma de re- nacer y de re-fundar este espacio que le ha negado la posibilidad de *ser*, *hacer* y de *pensar* de otro modo a sus propios habitantes.

A su vez, al no contar con el apoyo de los Estados Provincial y Nacional –en algunos casos las provincias no han adherido a la Ley 26852 que reconoce el Día de los Afroargentinos y de la Cultura Afro- las actividades culturales –que es el gran bastión de esta red- suponen un gasto económico muy fuerte para las organizaciones que no cuentan con los recursos suficientes para afrontarlos. Recordemos que el blanqueamiento también significó la vulnerabilidad de derechos a estos sectores de la sociedad; todavía en nuestro país los derechos humanos siguen siendo otorgados y concedidos por el color de piel. Esto conlleva a que la mayoría de los integrantes de la red no han podido acceder a estudios superiores y, por lo tanto, sus trabajos en algunos casos son informales y mal remunerados. Esto conduce a la privación de ciertos bienes materiales indispensables para llevar una vida digna. Como consecuencia de esta marginación económica, el trabajo en el *campo* se hace dificultoso, pesado, complejo. Sin embargo, el deseo de cambiarlo todo y de transformar ésta realidad hace que los afroargentinos/as entrelacen sus vínculos solidarios y hermanados para poder continuar generando acciones colectivas, “desde abajo”. Como señala Nancy Fraser:

“La distinción entre la injusticia económica y la cultural es, desde luego, una distinción analítica. En la práctica, las dos se entrecruzan. Incluso las instituciones económicas más materiales tienen una dimensión cultural constitutiva, irreductible; están atravesadas por significaciones y normas. Análogamente, aun las prácticas culturales más discursivas



tienen una dimensión político-económica constitutiva, irreducible; están atadas a bases materiales. Lejos de ocupar dos esferas herméticas separadas, la injusticia económica y la cultural se encuentran, por consiguiente, usualmente entrelazadas de modo que se refuerzan mutuamente de manera dialéctica. Las normas culturales injustamente parcializadas en contra de algunos están institucionalizadas en el Estado y la economía; de otra parte, las desventajas económicas impiden la participación igualitaria en la construcción de la cultura, en las esferas públicas y en la vida diaria. A menudo, el resultado es un círculo vicioso de subordinación cultural y económica". (Fraser, 1997 p. 6)

En este sentido, no caben dudas de que estas agrupaciones luchan y resisten para disminuir, por un lado, las diferencias entre los distintos grupos sociales y, por otro, para reparar la injusticia marcada por la raza, el género y la clase en lo que han sido sometidos históricamente sus abuelos/as y ellos mismos. Sin embargo, a pesar del silencio y el olvido en el que han vivido a lo largo de estos siglos, día a día multiplican sus apariciones públicas para velar por una justicia social que contemple el reconocimiento, la redistribución, la igualdad y el derecho a poder vivir en una sociedad más equitativa, libre de racismo y discriminación.

Notas

¹(Profesora de Historia. Magíster en Museología. Integrante de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana "Mario Luis López)

² Adquiere jerarquía constitucional a partir de su inclusión en el artículo 75, inciso 22, en la reforma constitucional de 1994

Bibliografía

Fraser, Nancy; La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación.; en En: Fraser, Nancy. *Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista"*, Capítulo I, Siglo de Hombres Editores, Santa Fé de Bogotá, 1997, pp. 17-54. Disponible en <<https://bit.ly/3pSZFzC>> . Recuperado el 1 de diciembre de 2019.

INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Argentina también es afro. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Presidencia de la Nación. Buenos Aires: 2017.

INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Racismo y xenofobia. Hacia una Argentina intercultural. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Presidencia de la Nación. Buenos Aires: 2016.



Lander, Edgardo. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2000

Lamadrid, Carlos. Afroargentinos del Tronco Colonial. Carta Informativa XXXIV de la Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Universidad Nacional de la Matanza, 2013.

Mees, Ludger; “¿Vino viejo en ordes nuevos? Continuidades y discontinuidades en la historia de los movimientos sociales; en Ibarra, Pedro y Tejerina, Benjamín (eds). En: “Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural”; Trotta; Madrid; 1998.

Mignolo, Walter. Una concepción descolonial del mundo: conversaciones de Francisco Carballo con Walter Mignolo. Buenos Aires: Del Signo, 2014

Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos De La Nación. Afrodescendientes y derechos humanos : Normativas, documentos y recomendaciones - 1a ed. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos, Buenos Aires: 2014.

Palermo, Zulma. Pensamiento argentino y opción descolonial. Buenos Aires: Del Signo, 2010.

Quijano, Anibal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Cuestiones y horizontes : de la dependencia histórico- estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires: CLACSO, 2014. Disponible en <<https://bit.ly/35axbcy>>. Recuperado el 1 de diciembre de 2019.

Segato, Rita. La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempo de políticas de identidad. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007.



Pentagramas colectivos y cantos insurgentes: FARC-EP.

Laura Daniela Giraldo Melo¹.

Resumen

En el siguiente apartado, se evidenciará como la música compuesta por cantautores (as) de las FARC-EP, ha generado al largo de su historia procesos de construcción de memoria colectiva e histórica como grupo guerrillero, para ello, se analizarán tres canciones compuestas por guerrilleros del grupo armado. Se pretende ahondar de forma puntual el conflicto armado colombiano y también se mencionará que es la memoria colectiva e histórica, para así comprender los procesos de construcción de la misma por medio del arte, específicamente de la música.

Palabras clave

Memoria colectiva; Conflicto; Colombia; Guerrilla; Historia y Música.

Introducción

La pertinencia de este trabajo de investigación es bastante alta, puesto que las ciencias sociales y humanas por su claro enfoque social, deberían incluir en sus proyectos e investigaciones los procesos artísticos como herramienta metodológica para comprender diversas dinámicas sociales dentro de la sociedad y la cultura en general. Por eso mismo, el enfoque de este trabajo centra su relevancia en el análisis musical de composiciones hechas por integrantes de la guerrilla de las FARC-EP en la década de los noventa, debido a los cambios políticos, sociales, económicos y culturales que estaba atravesando el país. Por ello, la importancia de la música no solo para construir memoria, sino para entender desde la academia los diferentes procesos sociales que han atravesado la conformación histórica de esta guerrilla, hace parte de una propuesta innovadora para entender la historia del conflicto armado del país desde distintas perspectivas y también para la evolución metodológica en las ciencias sociales con base en el arte.

Planteamiento del problema

En este escrito, se busca comprender la música como instrumento para la construcción de memoria, por tanto, es pertinente partir desde una rápida contextualización histórica del país en las últimas décadas del siglo XX. En la década de los sesentas en Colombia, las diferentes dinámicas políticas violentas del Frente Nacional y la época de La Violencia generaron el levantamiento apresurado de distintos grupos paramilitares, de



autodefensas y de algunas guerrillas. Por ello, el país se ha encontrado en una dinámica de conflicto armado durante periodos extensos, con el surgimiento de la guerrilla de las FARC-EP en el año 1964 y años después de los diferentes grupos paramilitares, Colombia sufrió una concentración de violencia heredada de las anteriores décadas y tristemente concentrada en poblaciones civiles que no eran partícipes directos en el conflicto, como lo menciona Marco Palacios en su libro *Violencia Pública en Colombia*. (Palacios, 2010)

La década de los noventa, fue relevante a nivel político, económico, histórico y cultural para el país; la Constitución de 1991, trajo consigo nuevos órdenes, donde el Estado reconoció diversidad étnica en el país. Lo que provocó que los diferentes bloques de las FARC, al movilizarse por el país, llegaran a lugares donde la población étnica, principalmente afrocolombiana era demasiada, lo que agregó a sus combatientes, integrantes afrodescendientes. También se logró una negociación con diferentes guerrillas como el M-19. Sin embargo, las consecuencias del narcotráfico que marcó de forma drástica los ochentas, dejaron marcas en la década siguiente, no solo en la política y la economía, sino también en los aspectos sociales y culturales.

La década de los noventa está marcada por diversos cambios dentro de un nuevo orden mundial, con profundas implicaciones para los Estados soberanos... Por lo tanto los Estados que no han logrado superar la compleja crisis política, asociada a los conflictos internos violentos, la pobreza, el desempleo, la falta de educación entre otros, pueden desencadenar una crisis de legitimidad institucional y por ende el fracaso. (Moreno, 2010, pág. 47)

Es importante resaltar, que en esta década los cambios dentro de la guerrilla de las FARC-EP, fueron bastante fuertes, después de los intentos fallidos por parte del gobierno colombiano de concretar unos acuerdos con la guerrilla, comenzando y finalizando la década. Lo anterior generó una época bastante violenta y cargada de enfrentamientos entre la guerrilla, el ejército nacional y los grupos paramilitares, donde las principales víctimas fueron diversas poblaciones civiles, en su gran mayoría en las zonas rurales del país, siendo el campesinado y los diferentes grupos étnicos, los principales afectados.

El primero y más importante de estos factores, es que la insurgencia colombiana ha encontrado en la autonomía municipal y regional, medianamente implementada en el pasado y ampliada por la nueva Constitución, un factor favorable a sus propósitos como organización armada. En efecto, a partir de los años ochenta, la guerrilla comenzó a



variar su condición de organización rural con influencia exclusiva en zonas periféricas, logrando con el paso del tiempo consolidar su influencia en amplias zonas del territorio nacional. (Echandía, 2010, pág. 229)

Comenzando el siglo XXI, como menciona (Palacios, 2010) en el “Pax Uribista” bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se vive una oleada de violencia cada vez más fuerte que las anteriores, donde la posibilidad de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP era cada vez más difusa e imposible, puesto que diferentes dinámicas ambientales, ilegales, económicas y sociales se sumaron al conflicto armado y la idea de exterminio por todas las partes cada vez era más marcada.

En el segundo periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, se logra efectuar el diálogo y el proceso de paz, lo que, generó distintas dinámicas de desarme, exigencias, participación política, entre otras para la guerrilla y verdad, compromiso y garantías para el Estado y los entes militares y paramilitares. Debido a ello, las principales poblaciones víctimas del conflicto armado colombiano en su búsqueda de paz, garantías y reparación, realizan diferentes procesos de construcción de memoria individual y colectiva, entre las mismas comunidades con o sin apoyo estatal, para así contar la historia de Colombia desde otra perspectiva no gubernamental, y así cimentar la memoria histórica del país no oficial.

Sin embargo, no solo las víctimas han generado procesos de construcción de memoria, también los “victimarios”, como lo menciona (Posada, 2018) en un artículo en la Revista Semana, donde aborda al sociólogo Joel Best, para entender la complejidad de las víctimas y los victimarios, entendiéndolos también como víctimas de un Estado fallido que fue el principal detonante de sus luchas armadas, aunque también bajo estas, se dañaron diversas comunidades de forma injustificada lo que los hace victimarios de la misma forma.

La identidad del grupo de víctimas permite pensar que se es moralmente superior e inocente y por lo tanto tener el derecho de infligir violencia, pero ahora una violencia que es moralmente legítima y por lo tanto una violencia no violenta. (Posada, 2018)

Para finalizar, a lo largo de la historia del conflicto armado, se han encontrado en el arte, diferentes mecanismos de construcción de memoria, por medio de las manualidades, la pintura, la fotografía, la música, la danza y diversas dinámicas de escritura, como la poesía y los cuentos. Por ende, es pertinente resaltar la importancia de la música dentro de la construcción de memoria individual, colectiva e histórica para la guerrilla de las



FARC-EP. Se encuentran diferentes grupos en cada frente guerrillero y, asimismo, diversas interpretaciones y géneros musicales que son un claro reflejo de la situación general del grupo o el individuo, se encuentran desde letras románticas, narraciones culturales y hechos históricos relevantes para la historia y la conformación de la guerrilla y, por ende, de la historia no oficial del conflicto armado del país.

Para entender los procesos de construcción de memoria dentro de las FARC-EP, es importante comprender qué es la memoria colectiva y la memoria histórica, con ello se pretende demostrar cómo la música creada por integrantes de la guerrilla fue una herramienta de construcción de memoria colectiva e histórica del grupo armado.

Memoria colectiva

Partiendo de la memoria individual como eje central para la construcción de la memoria colectiva, es importante saber que “la noción de la memoria como un asunto individual de retención de recuerdos y rememoración, por fuera de lo político” (Antequera, 2011, pág. 31). Con base a esto es importante comprender que el “recordar” es un problema no solo individual, sino que está completamente vinculado con afectaciones colectivas de determinados acontecimientos que afectaron ampliamente a una comunidad, donde no solo se generó un impacto frente a un hecho pasado que hizo parte de la vida de cada individuo, sino que también configuró la noción de comunidad. Cuando es un recuerdo en común, justamente como sucede con el conflicto armado y las afectaciones en las víctimas y los victimarios, y a ello se le llama memoria colectiva.

De allí, queda claro que quienes “recuerdan” no son los grupos sociales, sino los individuos, pero que no lo hacen solos, sino en relación con otros, y esa interacción, sobre la base de huellas de reconocimiento de lo sucedido, y que se presenta en grupos que tienen una relación con determinados acontecimientos, ha sido denominada “memoria colectiva”. (Antequera, 2011, pág. 32)

Memoria Histórica

La memoria histórica es importante para comprender determinados procesos de construcción histórica, ya que, la memoria colectiva, no es la memoria legitimada en el discurso histórico- político de las sociedades, y especialmente en Colombia, desde un punto de vista político se entiende que el proceso de memoria es mucho más que solo recordar.

Además, el abordaje de los sentidos del pasado y su incorporación en las luchas políticas pone sobre el tapete la cuestión de la relación entre memorias y verdades



históricas. El debate historiográfico sobre el tema se manifiesta centralmente en los intentos de legitimar a la historia oral dentro de los cánones de la disciplina y en las concepciones de la historia como narrativa construida. (Jelin, 2002, pág. 4)

Después de aclarar la diferencia entre las memorias, se puede afirmar que la música como construcción de narrativa política de las FARC, también hace parte de un proceso de reconstrucción de memoria colectiva, donde los integrantes de la guerrilla de las FARC-EP, compusieron determinadas piezas musicales, con el fin de conservar y mantener viva la historia política del grupo guerrillero, edificando así una fuerte memoria colectiva a partir de recuerdos individuales que comparten en comunidad distintos sentimientos, como sentimientos de lucha y orgullo por pertenecer al mencionado grupo.

La memoria histórica, no puede confundirse con la memoria colectiva, puesto que, aunque se asemejan, la historia se puede recopilar por medio de libros u otras herramientas que han permanecido en el tiempo de forma legítima, por el contrario, la memoria colectiva es la que lleva cada comunidad en sus raíces y en sus mentes en forma de recuerdos, que muchas veces no están escritos en un libro o plasmados en una fotografía, sino solo en el recuerdo y la tradición oral de un pueblo o comunidad.

De todo lo que precede resulta que la memoria colectiva no se confunde con la historia y que la expresión memoria histórica no ha sido una elección muy acertada, puesto que asocia dos términos que se oponen en más de un punto. La historia es, sin duda, la colección de los hechos que más espacio han ocupado en la memoria de los hombres. Pero leídos en los libros, enseñados y aprendidos en las escuelas, los acontecimientos pasados son elegidos, cotejados y clasificados siguiendo necesidades y reglas que no eran las de los grupos de hombres que han conservado largo tiempo su depósito vivo. (Halbwachs, 1968, pág. 212)

Metodología

Para realizar la investigación anteriormente planteada, es necesario utilizar una metodología cualitativa, puesto que se utilizará como instrumentos principales el análisis de discurso de las letras de diferentes canciones compuestas por ex combatientes de la guerrilla de las FARC-EP, para poder profundizar en su discursividad, la que respalda la música como herramienta para construir memoria histórica y colectiva.

Resultados y discusión

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como ya se mencionó con anterioridad (en el apartado teórico), ha llevado un proceso de reconstrucción de



memoria colectiva, justamente como organización, los integrantes (militantes) de esta guerrilla, por medio de la composición de canciones de diferentes géneros musicales. La característica principal de las canciones creadas, son la particular narrativa histórico-política que contiene cada una de sus letras. A continuación, se realizará el análisis de discurso de dos composiciones, que cumplen con las características ya mencionadas.

Canción número uno: Décimas del Cabrín - Los Compañeros

Género: corrido o ranchera

(Primera Estrofa)

Las semillas van regando en el alto del cañón

El Davis es un bastión de la lucha socialista

Resistencia comunista frente a la brutal represión

Los codos y el general que prendieron la violencia

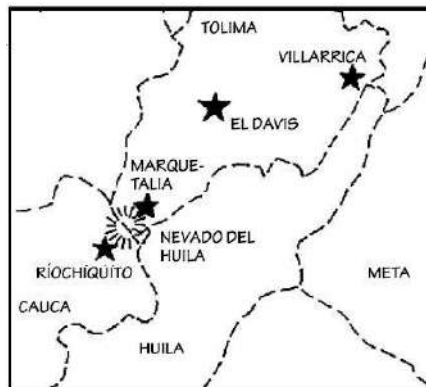
(Segunda Estrofa)

Agotaron la paciencia de esos hombres sin igual

Que le hicieron reto al man y a la historia reivindica

La batalla en Villarrica y el pelearé en Tierra Adentro

Sacrificio del momento que con muertos se rubrica



En 1952, en la vereda El Davis, surgieron las Autodefensas Campesinas, en manos de Juan de la Cruz Varela, en las veredas de El Roble y Galilea, en Villarrica, Tolima, gracias al ingreso de Varela y otros campesinos al Partido Comunista, de Villarrica, la orden era viajar hacia el alto Sumapaz (Páramo entre el departamento del Tolima, Huila, Meta y Cundinamarca). Los insurgentes, después de atacar una base militar, quedaron muy bien armados y en capacidad de desarrollo militar, después de algunos años y en un combate entre el ejército y la insurgencia campesina, aparece por primera vez Luis Morantes “Jacobó Arenas”. Villarrica completamente destruida, por los aviones de la



FAC (Fuerza Aérea Colombiana), las ofensivas del Estado hacia los grupos comunistas y hacia las insurgencias, cada día eran más fuertes y violentas.

Por ello, lo mencionado en las anteriores estrofas, describe como el departamento del Huila y el Tolima, fueron cuna de diferentes corrientes ideológicas, como la comunista, lo que generó el surgimiento de las bases histórico-políticas de la futuras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en manos de Jacobo Arenas y Manuel Marulanda “Tiro Fijo”.

(Tercera Estrofa)

Llanero Richard y Yosa, Morantes, Charro y Trujillo

Ideas y fierros con brillo con la fuerza fervorosa

Del alba nueva que se esboza

Unidad que se rebela cuando libertad se anhela

En la gloriosa epopeya que en Marquetalia se sella

En la tercera estrofa, se hace referencia a diferentes personajes históricos que son relevantes para la historia de la guerrilla, entre ellos, Isauro Yosa, Charro Negro y Ciro Trujillo, los tres, campesinos inconformes que después del diálogo, deciden unirse como guerrilla, para luchar por los malos manejos de la tierra, que, en manos de terratenientes conservadores, todos estaban. Refleja la valentía que poseían dichos personajes y como sin ellos, las FARC nunca hubieran surgido, sin embargo, finaliza la estrofa recordando una de las batallas más fuertes hacia la insurgencia campesina, la batalla en Marquetalia, que desplazó cientos de familias campesinas, que llegarían a veredas cercanas y con ello, el avance de la insurgencia, cada vez era más fuerte.





Canción número dos: Corrido de Marquetalia - Los Compañeros

Género: corrido o ranchera

(Introducción narrada)

Mayo 27 de 1964, Guillermo León Valencia

Presidente del frente Nacional y títere de los yankees

Ordena a su ministro de guerra, General Ruiz Novoa

Iniciar el ataque a Marquetalia

48 bravos guerrilleros de Manuel

Empuñando con el alma sus fierros

En la introducción de la presente canción se mencionan personajes como el presidente Guillermo León Valencia, conservador que en 1964, tal como menciona la canción, ordenó iniciar el ataque a Marquetalia, bajo el mando y la estrategia militar estadounidense, debido a que en la época se estaba llevando a cabo, el famoso Frente Nacional, donde se llegó a un acuerdo político y militar, para dividir los mandatos en periodos de cuatro años entre liberales y conservadores, y así evitar otra era de guerra como La Violencia. Por último, menciona a Manuel Marulanda, campesino que fundó al lado de Ciro Trujillo, Isauro Yosa y Jacobo Arenas, entre otros, la guerrilla de las FARC-EP. En la batalla de Marquetalia, donde la historia cuenta que 48 campesinos, combatieron con el ejército colombiano.

(Primera Estrofa)

Como olvidar la tragedia de las familias

Marchando por trochas de llanto y fango

Los niños y las bestias, el hombre que nos acedia

Desplazados en el tiempo, es gente que sigue huyendo

De las bombas infernales que incendian

Los maizales, las finquitas y el sustento

Después de la batalla en Marquetalia, entre el ejército y la insurgencia campesina, el desplazamiento de personas fue masivo, debido a la situación de conflicto que se estaba presentando, por ello la canción en la primera estrofa, menciona el dolor del



campesinado al tener que partir de su tierra, marchando todos juntos en familia, hasta con los animales.

Ese día la gente lloraba; una gran cantidad de compañeros, hombres, mujeres y niños, lloraban de ver tanto ejército, tantos aviones. Trajeron 12 aviones que bombardeaban, ametrallaban... Donde caía una bomba iba prendiendo monte, casas, todo; la gente se arrodillaba a pedirle a Dios, parecía juicio final. (Molano, 2016, pág. 38)

(Segunda Estrofa)

Donde Isaías cayó, nació una flor de jazmín

Pregonando en el contón, que la causa, que el amor

En las FARC se re-engendró, Pardo y Luis salgado

Y todos los inmolados en la guerrilla que avanza

Está puesta la esperanza de los pobres y explotados

En la segunda estrofa, narra como un líder campesino falleció en lo acontecido, sin embargo, en nombre de los caídos, se menciona que, en las FARC, siempre estará el recuerdo y la memoria de estos campesinos. Por ello, menciona que la esperanza de las personas desplazadas que quedaron sin nada y también en nombre de todo el campesinado que es explotado, en la guerrilla insurgente que, aunque hasta ahora nacía, se sabía iba a ser muy fuerte.

(Coro)

Marquetalia es resistencia, a la violencia estatal

Pueblo en armas que hoy es FARC

De los pobres la insurgencia, la diana de las conciencias

Marquetalia, Marquetalia, contagia la luz libertaria

Ya está bajando Manuel y el pueblo viene con él

Ya comienza la batalla

Resalta la importancia histórica de Marquetalia, como lugar emblema de la fundación de las primeras guerrillas de izquierda, entre ellas las FARC-EP. De nuevo menciona a Manuel Marulanda “Tiro fijo” como un personaje demasiado relevante para todo el proceso de creación de las FARC y de la lucha campesina en el país.



(Estrofa Tres)

*Hoy te canto comandante, compañero Charro Negro
 Que tu muerte no esté negro, impune como indignante
 La mecha y el detonante, de la lucha guerrillera
 Que a los ricos desespera, que bonito que es luchar
 Por la causa popular, por la que Charro muriera*

(Estrofa Cuatro)

*Ya con esta me despido, ya me voy pa' Río Chiquito
 Con Jacobo y con Trujillo, es Manuel un río crecido
 De resueltos oprimidos, marchando hacia la alborada
 Disparando una tonada, con Bolívar, con Manuel
 Con el pueblo al poder, habrá patria liberada*

Como ya se mencionó con anterioridad, Charro Negro, fue un campesino, militante del partido comunista, y luego guerrillero de las FARC-EP, por ello, es importante reivindicar la memoria de personajes como él, Ciro Trujillo, Jacobo Arenas y claramente de Manuel Marulanda.



Conclusiones

La música compuesta en la década de los noventa, por guerrilleros de las FARC-EP, fue principalmente una herramienta narrativa, para expresar diferentes acontecimientos históricos para el país y para la organización. Como se evidenció en los resultados,



ambas canciones narran la historia y los comienzos del grupo armado, mencionando en ellas personajes principales y la situación de Colombia en el momento.

Para finalizar, se evidenció que la música y el arte en general, pueden ser herramientas de recolección de información para las investigaciones en las ciencias sociales. Por tanto, por medio de la narrativa musical se generan procesos de construcción de memoria colectiva por parte del grupo guerrillero y memoria histórica para el país.

Notas

¹Estudiante sociología. Universidad Santo Tomás Colombia

Bibliografía

Antequerra, J. (2011). Memoria histórica como relato emblemático. consideraciones en medio de la emergencia de políticas de memoria en Colombia. Bogotá: Pontificia universidad Javeriana.

Echandía, C. (2010). La violencia en el conflicto armado durante los años 90. Orden Público, 229-246.

FARC, D. G. (2016). Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable y. Colombia.

Halbwachs, M. (1968). Memoria Colectiva y Memoria Histórica. París: Reis .

Hall, S. (1996). Cuestiones de Identidad Cultural. Madrid: Amorrortu Editores.

Jelin, E. (2002). Los Trabajos de la Memoria. Madrid: siglo veintiuno de españa editores, s.a.

Los Compañeros. (1995). Corrido Marquetalia

Los Compañeros. (1998). Décimas del Cabrín

Molano, A. (2016). A Lomo de Mula. Bogotá: AGUILAR.

Montoya, M. (2008). Constitución de 1991, conflictoo armado y control constitucional. Barcelona: UAB.

Moreno, A. (2006). Transformaciones internas de las FARC a partir de los cambios políticos por los que atraviesa el Estado colombiano. Bogotá: Papel Político.

Palacios, M. (2010). Violencia Pública en Colombia, 1958-2010. Bogotá: Fodo de Cultura Económica.

Posada, J. (2 de Julio de 2018). Semana. Obtenido de Semana: <<https://bit.ly/35bcg9g>>
Revista Semana. (26 de Mayo de 2017). *Revista Semana*. Obtenido de Revista Semana: <https://www.semana.com/nacion/galeria/fotos-ineditas-de-las-farc-53-anos-en-marquetalia/526706>



Relaciones entre el tejido y la sororidad.

Ana María Sossa Londoño

Resumen

Esta investigación analiza experiencias de mujeres sororas organizadas alrededor del tejido posterior a hechos victimizantes, resultados del conflicto armado colombiano con más de 60 años de existencia, con el fin de comprender los aportes de la sororidad al tejido y, a su vez, reconocerlo como una acción que propicia los procesos de sororidad. El tejido, como saber ancestral, permite la comunicación de diversos temas en un lenguaje universal, que, al ser creado con las manos, se carga simbólicamente de su sello personal, de su visión del mundo y de su historia individual. Tradicionalmente relacionado con el universo femenino, como una actividad artesanal y doméstica, pero que en espacios de reivindicación social toma otros sentidos y permite el establecimiento de redes de apoyo mutuo.

La sororidad permite la cohesión entre las mujeres para crear procesos de construcción de tejido social como un aporte a la paz y como una resistencia no violenta. La sororidad implica orgullo, apoyo e identificación con otras mujeres, con base en un ejercicio horizontal y equitativo que permita visibilizar las acciones individuales y colectivas para reivindicar otras visiones del mundo y construir espacios de empoderamiento social, donde el tejido es la acción.

El enfoque metodológico es la hermenéutica, por su capacidad de preguntar por los sujetos en la acción, establecer vínculos de cercanía con estos, y comprender las narrativas creadas a partir de signos, símbolos, discursos y subjetividades, que se plasman en creaciones simbólicas y lingüísticas, que para este caso son artefactos textiles.

Palabras clave

Tejido; Sororidad; Mujeres.

Introducción

Este artículo tiene su origen en la investigación: El Tejido y la Sororidad, y su aporte a la construcción de Memoria, a partir del Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón, cuyo propósito principal era la comprensión de las relaciones entre el Tejido y la Sororidad, y su papel en la construcción de la Memoria, a partir del caso del Costurero antes mencionado. Particularmente está centrado en el capítulo 5: El Tejido en los



procesos de construcción de Memoria realizados por mujeres, y fue desarrollado como tesis de grado de la Maestría en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Antioquia, Colombia.

Esta investigación está situada en el municipio de Sonsón, Antioquia, lugar en el que se encuentra ubicada la unidad de análisis que es el Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón, con un recorte temporal que inicia en el año 2015 y finaliza en el año 2018. Se selecciona este lugar para la realización de esta investigación, puesto que este municipio cuenta con características geográficas, físicas e históricas, que aseveraron la presencia del conflicto allí, y que posibilitaron el surgimiento de iniciativas de memoria con una trayectoria de más de una década como es el caso del Costurero, iniciativa conformada únicamente por mujeres, sobrevivientes de diferentes hechos victimizantes del conflicto armado.

El presente trabajo busca entonces dar cuenta de las vivencias y experiencias de las mujeres en el municipio de Sonsón (Antioquia) que, organizadas y movilizadas a través del Costurero, han hecho de este espacio un referente para la construcción de la paz y el empoderamiento conducentes a procesos de reconciliación social; donde se analizan particularmente las iniciativas de memoria materializadas a través del tejido, en donde el papel que juegan las tejedoras como mujeres es elemental como representación de la sororidad.

Problematización

Por más de sesenta años Colombia ha vivido un conflicto armado que ha dejado más de ocho millones quinientas mil víctimas de hechos victimizantes como el despojo y abandono forzado de la tierra, los atentados terroristas, las amenazas, las minas antipersonal, los homicidios, los secuestros y las desapariciones forzadas, la tortura, entre otros; que sumados a las dinámicas que trae consigo el tráfico de drogas, la violencia política y el problema agrario, aseveran aumentos en los índices de violencia; hechos protagonizados por actores legales e ilegales como lo son: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: Ejército del Pueblo –FARC-EP–, el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–, los paramilitares, el Ejército Nacional de Colombia, el Gobierno, entre otros. La pugna por el poder político, la posesión de las tierras, el control de los recursos económicos, el negocio de cultivos ilícitos, el dominio de órdenes ilegales y violentos en la pequeña y mediana escala, entre otros, aseguran la permanencia y perpetuidad del conflicto a través de los años.



Ante este contexto de guerra no solo quedan los daños materiales al patrimonio, a los bienes civiles, al desarrollo local, entre otros; sino daños inmateriales de tipo emocional, sociocultural, moral, político, entre otros. Por lo tanto, las víctimas tienen un papel predominante en la construcción de la memoria del conflicto con miras a la no repetición, lo que favorece la aparición de experiencias de resistencia o respuesta al conflicto que aporten y visibilicen los procesos que se han gestado a partir de las narrativas y los sentidos de actores sociales que han sobrevivido al conflicto como un acto político para reconstruir el tejido social deshecho por la guerra a través de acciones simbólicas que les permitan recuperar la confianza y sobreponerse a las afectaciones físicas y psicológicas, personales y familiares que les dejó el conflicto.

Los relatos y las experiencias invisibilizados por la violencia se dan a conocer a través de acciones, discursos y/o prácticas, efímeras o en permanente construcción, que se consolidan como iniciativas de memoria y que surgen con el fin de expresar las memorias del conflicto en lenguajes diversos. Se construyen de manera individual o colectiva para narrar y dar sentido desde la experiencia personal o grupal a sus emociones frente diversos eventos traumáticos; siendo estas herramientas para la transmisión de conocimiento, la denuncia de crímenes y la reflexión (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) - Grupo de Memoria Histórica, 2009, pág. 44).

La iniciativa de memoria que se estudia en esta investigación está ubicada en la subregión del Oriente Antioqueño que debido a su enorme potencial estratégico (autopista que conecta la región con la capital del país, represas que fortalecen la transmisión de energía, gran biodiversidad potenciada por la variedad de pisos térmicos que le permiten ser una gran despensa agropecuaria, importantes complejos industriales, etc.) vivió con intensidad el conflicto armado. Compuesta por 23 municipios con una marcada diferencia entre el *oriente cercano* a la capital del departamento, la ciudad de Medellín y sus dinámicas; y, el *oriente lejano* donde predominan condiciones de aislamiento (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos - Presidencia de la República, 2018, pág. 1). Estos municipios se agrupan a su vez en cuatro zonas según las características físicas del territorio, y son la zona de los embalses (cerca a embalses y centrales hidroeléctricas), la zona del altiplano (cerca a complejos industriales y al aeropuerto internacional), la zona de bosques (influenciada por la autopista Medellín-Bogotá) y la zona de páramo, donde está ubicado el municipio de Sonsón, y que comunica el departamento de Antioquia con el Magdalena Medio y el Cauca, lo que la constituye como un corredor estratégico para el comercio, la ilegalidad



y los grupos armados como el frente 9 y el frente 47 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: Ejército del Pueblo (FARC-EP), el bloque Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el bloque José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y las Fuerzas Militares del Ejército Nacional, que, entre finales de la década de los 90 y principios del 2000 hacían presencia en el municipio de Sonsón en disputa por este territorio (Grisales Hurtado, 2016), perpetrando hechos victimizantes como: la intimidación basada en el terror, la extorsión, el secuestro, el desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos, los homicidios indiscriminados, los retenes ilegales, las amenazas, las desapariciones forzadas y las minas antipersonal.

Teniendo en cuenta que las características físicas y geográficas del municipio de Sonsón, ubicado en zona de páramo, permiten la estadía del conflicto, se buscó vislumbrar las maneras en las que sus habitantes se movilizaron a partir de estos hechos, donde se consolidan y fortalecen iniciativas de memoria, organizaciones de víctimas sobrevivientes y movimientos sociales, en pos de la reclamación de derechos, la visibilización de las víctimas y las garantías de no repetición; una de ellas, el Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón, que se estudia en este trabajo.

Entendiendo que el conflicto armado en Colombia produjo millones de víctimas, en donde si bien, el aporte en vidas fue mayoritariamente de los hombres por hacer parte directa de las confrontaciones en la guerra; un alto porcentaje de las víctimas son las mujeres, quienes sobreviven ante la pérdida de sus familias, hijos, hermanos, vecinos; la destrucción de sus espacios de encuentro y territorios, el desarrollo de su vida cotidiana y el desconcierto frente a sus proyectos de vida. Diversos estudios han resaltado que las mujeres tienen mayor disposición a los procesos de acompañamiento psicosocial que se dan posterior a hechos violentos y procesos dolorosos, teniendo gran compromiso ante la recuperación material y emocional de sus hogares. Se resalta entonces el potencial político de iniciativas como el Costurero, conformado únicamente por mujeres donde la sororidad, permite la construcción de procesos de solidaridad y reconstrucción del tejido social, en donde las mujeres se asocian en pos de generar cohesión y credibilidad frente a las verdades expuestas de los sucesos vividos, pero también por el aporte a los procesos de mejoramiento y fortalecimiento de relaciones comunales, vecinales, de género, entre otros.

El concepto de sororidad manifiesta la alianza profunda entre las mujeres, donde no hay jerarquías, basado en el principio de la igualdad humana y en el principio de



reciprocidad, lo que implica compartir los recursos, los conocimientos, las tareas, los éxitos. Este concepto, desarrollado desde Marcela Lagarde y de los Ríos, se sustenta en el saber solidario de las mujeres como una alternativa política que busca la confluencia y sintonía de las mujeres como base del relacionamiento.

Se puede inferir que la sororidad y la acción no pueden separarse; en tanto la sororidad involucra el vínculo y la hermandad de las mujeres como fuerza motivadora de dinámicas sociales de acción cohesionada como lo es el Costurero. Al crear vínculos de tejido social, las relaciones, las prácticas, las situaciones y las cotidianidades de las mujeres se convierten en la base de nuevas formas de solidaridad social para superar momentos de crisis y proponer visiones del mundo que posibiliten la acción pública, con base en procesos de empoderamiento que no separa las luchas colectivas de la vida personal, de manera que todo aquello que se hace desde lo individual tiene una influencia en las acciones colectivas y viceversa. Ya que, como menciona Lagarde, lo personal es realmente político, de esta forma, se deconstruyen aquellas visiones y acciones homogeneizadoras de la vida social fundamentalmente masculinas.

La acción, que no puede separarse de la sororidad es, en este caso el Tejido, que, para esta investigación, se aborda empíricamente y se entiende de dos maneras: la primera, en términos de materialidad, del objeto tangible que se crea con tela, aguja e hilo, y que representa lo vivido: artefactos ornamentales o utilitarios cuya carga simbólica está estrechamente ligada a la segunda manera de abordar el concepto de tejido, desde lo simbólico, que se entiende en términos de lo que significa encontrarse con otras y vincularse para dialogar, recordar, actuar y construir memoria. Así pues, el tejido como base de la sororidad del Costurero permite expresar en términos de un artefacto, las posibilidades de acción, de encuentro y de empoderamiento social; y en términos del tiempo requerido para la realización de dicho artefacto como procesos de construcción de verdades y memoria que se dan para superar los efectos del conflicto armado.

El tejido como saber ancestral permite comunicar temas en un lenguaje universal; saber tejer es una destreza que se aprende a través de largas tradiciones y que se transmite de generación en generación. Principalmente relacionado con el universo femenino, artesanal y doméstico; es un medio de expresión vital para la mujer y un medio de escritura femenina, que, al ser creada con las manos, se carga simbólicamente del sello personal, de la visión del mundo; es decir, que lleva la firma y huella de quien teje.

Se podría decir que el tejido tiene la doble capacidad de ser literal o metafórico, pensado en un primer momento en el movimiento rítmico y alternativo que se forja con la aguja y



el hilo a través del textil con el paso del tiempo, que es el movimiento por el que pasa el cuerpo y el alma para la creación de un textil testimonial que requiere el ejercicio de la memoria para revivir aquellos hechos violentos que se quiere denunciar. Luego, en medio de lazadas, la aguja con hilo que atraviesa la tela se enreda y crea un nudo, que se entiende como aquellos obstáculos que se presentan en el camino, tales como dificultades emocionales para acceder al recuerdo, miedo de narrar los hechos sucedidos por temor a que alguien los escuche, conflictos internos por compartir ese momento íntimo con otros, conocidos y desconocidos, etc.

El tejido como materialidad es escritura, en la que se cuenta lo que al habla no le es permitido decir. Como vía de expresión en él se comunican y graban ideas sobre la tela, tal como serían escritas sobre el papel; se pueden contar historias, hacer referencia a hechos importantes, producir relatos, develar la posición personal o grupal frente a un suceso o a una decisión, hacer denuncias, etc. Es un modo de expresión y comunicación personal y grupal; una herramienta mediadora y un acto reivindicativo entre mi memoria y los otros que contemplarán la obra resultante. La técnica textil tiene la posibilidad de ser herramientas de reclamación o denuncia desde un uso transgresor y subversivo. Una de sus ventajas es la posibilidad de perdurar en el tiempo, permitiendo que estos textiles testimoniales lleguen a nuevas generaciones o a otros lugares del mundo dando evidencia de los hechos ocurridos, en la búsqueda de la no repetición, la justicia y la paz.

En el Costurero, hacer memoria a través del tejido fortalece los vínculos de unión y de sociabilidad, es decir de sororidad, al confiar en las puntadas mis saberes propios elaborando un proceso de duelo en cada movimiento de la aguja, impregnando el textil de mi memoria personal. La interacción que se genera a través del Costurero permite la construcción de significados compartidos que interpretan el pasado individual y producen acuerdos comunes de identidad colectiva y memorias colectivas.

Metodología

El enfoque investigativo es cualitativo porque permite reconocer los significados que tienen las memorias individuales y colectivas, y da importancia a las narrativas a través de las cuales se comunica la memoria. La investigación cualitativa estudia la realidad en el contexto propio y natural, aporta al entendimiento de cómo los sujetos implicados en el problema perciben, entienden e interpretan el fenómeno según sus propios significados. Posibilita el estudio de colectivos, del sistema de relaciones y la interacción entre los actores que a él pertenecen, esto permite comprender los comportamientos,



los sentidos y las manifestaciones de estos actores, del mismo modo que sus actitudes, pensamientos, reflexiones y creencias. En la investigación cualitativa existe un interés por buscar el sentido de la acción humana, lo que permite en esta investigación indagar por los imaginarios, las narrativas y las representaciones en las relaciones de la sororidad y el tejido.

De manera complementaria, el enfoque metodológico es el hermenéutico, puesto que permite comprender la realidad a partir de las relaciones dadas entre un hecho y el contexto en el que se presenta, logrando la comprensión de un fenómeno específico desde la capacidad que brinda este enfoque de indagar por los sentidos de las interacciones sociales para poder interpretar el significado de sus hechos en un tiempo y espacio específicos. Particularmente abordada desde la hermenéutica propuesta por Paul Ricoeur, que, guiada por la pregunta de, ¿quién es el sujeto en la acción?, entiende la posibilidad de vislumbrar la realidad del ser humano y “*su expresividad a través de las creaciones simbólicas y lingüísticas*” (Agís Villaverde, 2003, pág. 84). Este enfoque contempla una perspectiva narrativa para la interpretación de discursos, acompañados de signos, símbolos, subjetividades y contextos del problema de investigación. Así pues, “*la interpretación, objeto primordial de la hermenéutica, es una búsqueda constante de sentido, y por medio de esta vía supone un encuentro con el ser, o mejor dicho, con la necesidad de desvelar el sentido del ser*” (Agís Villaverde, 2003, pág. 88).

Bajo este enfoque se da prioridad a los actores, es decir, a las mujeres pertenecientes al Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón; entendiendo los comportamientos y las relaciones dadas entre ellas mismas, sus intereses personales y los colectivos, las relaciones de poder que pueden surgir en este espacio, los niveles de participación, entre otros. Asimismo facilita la participación de la investigadora en las actividades del Costurero para comprender el fenómeno y llegar al entendimiento del problema, aportando a la interpretación de los signos que se encuentran presentes en los artefactos creados a partir del tejido por las mujeres sororas del Costurero.

Se utilizaron instrumentos cualitativos que permiten establecer vínculos más cercanos con los sujetos, favorecen el abordaje del problema, en donde las motivaciones, pensamientos, sentires, actitudes y creencias de los actores son importantes, y posibilitan la interacción y la participación de los individuos a partir de actividades y experiencias diversas. Los instrumentos utilizados fueron, la *revisión documental*, que posibilitó el rastreo de las fuentes y documentos que aportaban al desarrollo de los conceptos teóricos y los objetivos de la investigación; la *observación participante*, que



implicó la intervención e interacción directa y activa de la investigadora con el Costurero; la *entrevista en profundidad*, que permitió recopilar información contextualizada, explorando las subjetividades a través de una relación de confianza entre el entrevistador y el entrevistado; y las *técnicas interactivas* que facilitaron la comprensión de la realidad humana a partir de situaciones, imaginarios y comportamientos desde dispositivos de interacción como los *diálogos informales* y los *talleres de tejido / bordado*; herramienta principal de recuperación de información a través de representaciones en el textil.

Resultados

La experiencia del Costurero fue analizada a través de los conceptos de sororidad y tejido, y desde ahí fue posible reconocer esta iniciativa como un espacio formador de empoderamiento y de reconciliación en el contexto del conflicto armado. Se resalta uno de los talleres de tejido / bordado, que dio como resultado el ejercicio “*De orugas a mariposas*”, en donde las participantes, víctimas sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, se nombraron como mujeres capaces y poderosas, representándose cada una como una mariposa que había logrado transformarse en medio de las dificultades. Al ser el discurso de los tejidos concreto y no especulativo, las tejedoras se nombran y se representan a partir de su historia personal de vida y del papel que representan en el colectivo del Costurero.

Las mujeres sororas que pertenecen al Costurero tejen y se tejen, entendiendo el tejer desde lo literal y desde lo metafórico; tejen piezas textiles a través del proceso repetitivo de insertar la aguja enhebrada en la tela siguiendo un patrón, y se tejen entre ellas formando nuevas relaciones y redes de apoyo para relacionarse con el mundo. Entienden que el tejido es una herramienta mediadora, reparadora, sanadora, reclamadora, denunciante, recuperadora. Media conflictos, repara rupturas, sana las heridas, reclama ante las injusticias, denuncia las atrocidades de la guerra y recupera la historia para exponerla públicamente y evitar que se repita.

Se resalta como primordial que la práctica del tejido sea colectiva, ya que en ese espacio se socializan aspectos de la vida cotidiana, noticias de interés del municipio, oportunidades para nuevos proyectos, entre otros temas, que fortalecen los vínculos de vecindad, pero más estrechamente los vínculos de sororidad, donde ante las necesidades de los otros se empatiza y se genera una red de apoyo para salir adelante. El significado que tiene el Costurero y la participación activa en él para la vida de las tejedoras va más allá, en este momento, del proceso de mitigación del dolor por el hecho



violento o de la construcción de la memoria en torno a ese suceso; se consolida como un espacio para el aprendizaje, para la socialización y para la amistad. De manera complementaria, el tejido también permite compartir los saberes individuales para el bienestar del grupo, aprendiendo o enseñando un saber específico que favorezca las posibilidades de crecimiento del Costurero desde un horizonte, unos objetivos y unas estrategias comunes, como lo es la comercialización de artefactos tejidos que les permitan un ingreso económico para suplir las necesidades individuales y grupales.

El proceso de tejer, bordar o coser, como movimiento rítmico repetitivo, le permite al cuerpo físico conectarse con su ser interior. Este proceso por el que pasa cada tejedora es realmente importante porque le permite recordar y entenderse en su pasado, reflexionar, tramitar el dolor y externalizar las sensaciones y emociones a través del diálogo. Se resalta en este proceso la necesidad de un equilibrio entre las conversaciones y los silencios, que den finalmente la posibilidad de interlocutar de manera no violenta a través del tejido. Este tejido permite comunicar temas en un lenguaje universal. El textil es la primera casa que habitamos, con la que nos cubren al nacer y la que nos da la seguridad de relacionarnos con el mundo. Se constituye como una forma de escribir, de anunciar y denunciar. Pero para lograr esta expresión se requiere de autoestima y de seguridad en sí mismo para superar la incertidumbre del devenir, siendo la autoestima una de las principales características de la sororidad.

Reflexiones finales

El Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón se constituye a sí mismo y a las mujeres que a él pertenecen, como una red de apoyo informal, donde se descargan las tragedias. Por lo que la pertenencia al Costurero representa la oportunidad de disipar las tristezas, pero a la vez, de establecer vínculos de amistad que se acompañan en el proceso de sanación. Esto es posible gracias a la cohesión y el sentido de pertenencia de las mujeres tejedoras.

Experiencias como las del Costurero evidencian cómo, desde la cotidianidad de las mujeres, es posible generar procesos de construcción de tejido social, de sororidad y de empoderamiento que posibiliten la recuperación y construcción de la memoria, el aporte a la paz y otras posibilidades de construir sociedad, como alternativa a la violencia armada. El empoderamiento de las mujeres desempeña un papel fundamental en su vida social y política.

Aunque podría decirse que el resultado final del artefacto tejido es importante, ya que funciona como evidencia o denuncia de algún hecho, es el proceso el realmente



importante; el tiempo dedicado a coser, tejer o bordar es tiempo de conversación, de diálogo, de reflexión, de maduración del proceso propio de cada víctima; a través del acto de tejer se llega a un estado de conciencia, silencio, escucha y tranquilidad a través de la concentración. Se debe comprender el lenguaje expresado oralmente o a través del tejido en la doble posibilidad de ser conductor del bien o del mal, pero también como conductor del entendimiento de las causas o razones de dicho mal ocurrido en sus vidas, en donde dar paso al duelo, al llanto y a la tristeza permiten la interpretación del trauma, lo que amplifica la mirada si hay aportes de las compañeras que escuchan; no revictimiza al dar espacio al discurso libre y hasta donde la víctima desee expresar y permite la comprensión de un suceso desde múltiples aristas.

Para entender el tejido desde lo simbólico hay que entender las transformaciones que se dan en el ser humano al realizar esta actividad. El movimiento repetitivo que se da en el tejido focaliza la atención del tejedor para cumplir con un objetivo para el que requiere su total atención, aporta la sensación de bienestar al permitirle al actor escucharse en un vaivén mental en el que los pensamientos van y vienen al ritmo de las manos entrelazando el hilo en la tela, fortalece los lazos sociales al ser una actividad que favorece los encuentros grupales, se presta para dialogar sobre aquellos que les inquieta, contar historias de vida e intercambiar conocimientos, y da satisfacción personal por el proceso de creación propio. Tan importante como lo es el diálogo y la conversación también lo es el silencio. Las tejedoras manifestaban haber necesitado momentos de silencio y soledad para tramitar su dolor antes de compartirlo con las demás, y, que el acto de tejer les aportaba claridad a sus pensamientos y orden a sus ideas para tomar las fuerzas para contarlo.

En los espacios de creación colectiva se busca que los materiales sean de uso común para que a través del préstamo y el compartir de estos implementos se facilite la conversación y el diálogo. Las telas, las agujas y el hilo son los vehículos activos de la comunicación y la transmisión de la memoria, siendo el tejido una herramienta que permite el recuerdo y la reflexión previa a la intervención del textil, el único riesgo que tiene es que en cada puntada se cuente una verdad. Esta técnica brinda la posibilidad de tener un espacio propio de intimidad y autorrealización.

Para finalizar, el tejido y los artefactos resultantes de esta técnica tienen diferentes funcionalidades. La primera es como un ejercicio terapéutico para darle voz a los recuerdos, liberar las experiencias y externalizar las emociones; los dolores, las tristezas. El tejido como forma de terapia se utiliza en diversas disciplinas, pero



especialmente en el área de la salud. A través de esto se pretende la transición entre un estado de duelo y de luto, a un estado de la comprensión del nuevo proyecto de vida, a través de la confianza y la autoestima. En segundo lugar, el tejer como un acto político trabaja con el trauma, construye la memoria, sirve para la transmisión de conocimiento y queda como testimonio y reclamación ante la violación de derechos humanos; en el tejido nos reconocemos como sujetos de derechos como una manera de interlocutar de manera no violenta, interviniendo en la búsqueda de la paz. En tercer lugar, el tejido como una forma de participación social, en la que las mujeres se movilizan en torno a un mismo fin y que permite ejercicios de sororidad como es el caso del Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón, en donde, la formación de un colectivo les da respaldo para tomar posturas políticas y participar de las luchas que les conciernen. Finalmente, el tejido también funciona como una manera de crear economías colaborativas y obtener recursos económicos que les permitan subsistir y satisfacer las necesidades básicas que cada una de las participantes tiene.

Referencias bibliográficas

- Agís Villaverde, M. (2003). La hermenéutica de Paul Ricoeur en el marco de la filosofía contemporánea. *Azafea. Rev. filos*(5), 75-97.
- Arias López, B. E. (enero - junio de 2017). Entre-tejidos y Redes. Recursos estratégicos de cuidado de la vida y promoción de la salud mental en contextos de sufrimiento social. *Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social* (23), 51-72.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) - Grupo de Memoria Histórica. (2009). *Memorias en tiempo de guerra. Repertorio de iniciativas*. Bogotá: Puntoaparte editores.
- Consejería Presidencial para los Derechos Humanos - Presidencia de la República. (10 de marzo de 2018). *Panorama actual del oriente antioqueño*. Obtenido de Consejería Presidencial para los Derechos Humanos - Presidencia de la República: <<https://bit.ly/2LlqxcR>>
- González Stephan, B. (2002). Con hilo y aguja: el tejido de la otra memoria. *Arrabal*, 4, 97 - 111.
- Grisales Hurtado, N. I. (Dirección). (2016). *Luces y sombras. Reconstrucción de memoria sobre La Pinera* [Película]. Recuperado el 10 de marzo de 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=aorqbZsm6xw>
- Lagarde y de los Ríos, M. (2000). Autoestima y Género. *Cuadernos inacabados*, 39: *Claves feministas para la autoestima de las mujeres*, 1 - 18.



- Lagarde y de los Ríos, M. (10 de octubre de 2006). *Pacto entre mujeres - Sororidad*. Obtenido de Coordinadora Española para el lobby europeo de mujeres - Celem: http://e-mujeres.net/wp-content/uploads/2016/08/pacto_entre_mujeres_sororidad.pdf
- Lagarde y de los Ríos, M. (2012). *El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías*. México: Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Gobierno del Distrito Federal.
- Lagarde, M. (11 de junio de 2009). *La política feminista de la sororidad*. Obtenido de Mujeres en red. El periódico feminista: <http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1771>
- Londoño Jaramillo, A. J. (2016). *Sonsón 1962-2005: Historia de una Transformación*. Gobernación de Antioquia.
- López Castaño, M. (1994). El tejido como escritura y el orden femenino. *Historia crítica*, 9, 96 - 101.
- Villa Gómez, J. D. (2007). *Entre pasos y abrazos. Las promotoras de vida y salud mental, PROVISAME, se transforman y reconstruyen el tejido social del oriente antioqueño* (1era. ed.). Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)-Programa por la Paz, Asociación de mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR).
- Villa Gómez, J. D. (2016). Intervenciones psicosociales en el marco de acciones de reparación a víctimas del conflicto armado colombiano. *Estudios Centroamericanos*, 71(744), 81 - 85. Obtenido de <<https://bit.ly/3pL1sXg>>
- Villa Gómez, J. D. (2016). Recordar para reconstruir: el papel de la memoria en la reconstrucción del tejido social Una perspectiva psicosocial para la construcción de memorias transformadoras. En E. A. (Compilador), *Conflicto armado, justicia y memoria. Tomo 1: Teoría crítica de la violencia y prácticas de memoria y resistencia* (págs. 183 - 215). Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.
- Villa Gómez, J. D., Londoño, N. M., Gallego, M., Arango, L. I., & Rosso Pérez, M. (Julio - Diciembre de 2016). Apoyo mutuo, liderazgo afectivo y experiencia clínica comunitaria. Acompañamiento psicosocial para la "rehabilitación" de víctimas del conflicto armado. *El Ágora*, 427 - 452.



Las formas de acción colectiva y la organización sindical en los procesos de movilización de las docentes santafesinas durante la dictadura cívico-militar de 1966-1973.

Carlos Marcelo Andelique

Resumen

Las acciones colectivas que se desarrollaron durante la dictadura cívico-militar autodenominada “Revolución Argentina” entre 1966 y 1973 generaron diferentes experiencias organizativas de lucha de los trabajadores en todo el país, que en algunos casos implicaron una importante radicalización política, como las protestas obrero-estudiantes de la ciudad de Córdoba y Rosario. Atendiendo al contexto de la conflictividad social y política del período, en el presente trabajo pretendemos analizar la confrontación política entre los docentes santafesinos, representados a través de diferentes organizaciones sindicales y el gobierno dictatorial de la provincia de Santa Fe entre 1966- 1973. El recorte en 1966 obedece a los cambios socio-económicos y políticos que inició el régimen a nivel nacional y provincial, y que afectaron al sistema educativo y los trabajadores docentes. Y se cierra en 1973, porque durante ese año se formó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en la que tuvieron una importante participación los docentes santafesinos.

En este marco, nos proponemos como objetivos indagar sobre las características que tuvieron las relaciones entre los trabajadores de la educación y el gobierno dictatorial, las organizaciones sindicales y los procesos de movilización que viabilizaron las demandas, las razones que los impulsaron y los repertorios de acción que desplegaron. Se llevará a cabo una metodología cualitativa centrada en el análisis de artículos periodísticos de la época, publicados en el Diario El Litoral y en el Nuevo Diario de la ciudad de Santa Fe y en entrevistas realizadas a militantes políticos y sindicales que participaron en aquellos acontecimientos. En general, podemos adelantar como conclusiones provisorias que durante estos años se evidencia un alto proceso de sindicalización y una gran participación de jóvenes docentes en nuevos sindicatos que incorporaron el nombre de “trabajadores de la educación” y que se articularon con organizaciones provenientes del movimiento obrero.

Palabras clave

Formas de acción colectiva; Organizaciones sindicales; Docentes santafesinos; Dictadura cívico-militar de 1966-1973.



Introducción y fundamentación del problema

A partir de 1966 se pueden reconocer una serie de conflictos y experiencias organizativas de lucha de los docentes a nivel local, provincial y nacional que resultaron muy importantes en la configuración de nuevos formatos de acción colectiva, que impactaron en las identidades con las que se reconocían los agentes que participaron de las mismas y que gestaron organizaciones sindicales de diversas características, de alcance provincial y nacional como la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) creada en 1973.

Sobre esta temática vinculada a la docencia y sus organizaciones sindicales hay diferentes investigaciones. Por un lado, está la obra de Vázquez y Balduzzi (2000), quienes han estudiado el proceso de conformación de la CTERA como expresión de la unidad sindical y de nuevas concepciones sobre el sindicalismo docente desde una perspectiva más amplia y nacional. Por otro lado, hay trabajos referidos al ámbito provincial y/o local como la tesis de doctorado de Guillermo Ríos “Protestas, territorios e identidades en el proceso de sindicalización docente santafesino (1969-1976). Un abordaje desde la historia oral”; una producción del mismo autor de 2007 referida a las protestas docentes y a la relación entre las propuestas pedagógicas y el proceso de sindicalización durante la década de 1960 y 1970; un artículo de Luciano Alonso (2007) donde se aborda el rol que jugaron diferentes mujeres en la historia del gremialismo docente entre principio del siglo XX y la década del setenta; un trabajo de Fabiana Alonso (2008), donde se analizan a partir de fuentes orales las identidades que construyeron los docentes como trabajadores de la educación en el interior de las organizaciones gremiales entre finales de la década del sesenta y comienzo del setenta. También hay producciones de mi autoría referidos al mismo período y otros trabajos elaborados conjuntamente con María Cecilia Tonon (2014, 2016) sobre la década del ochenta en las cuales analizamos la conflictividad docente, sus organizaciones sindicales y las acciones colectivas contenciosas.

Se considera relevante el abordaje de la temática propuesta porque refiere a aspectos de la década previa a la dictadura de 1976 que no han sido suficientemente indagados en el ámbito local. Más allá de algunas investigaciones en curso respecto del período, se cuenta únicamente con un trabajo exploratorio sobre un sindicato estatal que parte del período 1971-72 para proyectarse hacia etapas posteriores (Alonso, 2017) y de trabajos más vinculados con las memorias sociales sobre el período producidos con distinto formato por un sindicato docente (AMSAFE). Atendiendo a esta vacancia, esta



investigación pretende ser un aporte al análisis de los alcances políticos de la conflictividad social desplegada por las organizaciones sindicales de los trabajadores en el marco de esa compleja trama social y política, reconociendo el escenario local como un territorio de interacción y confrontación imbricado con otros niveles espaciales.

En función de este estado de situación, me propongo analizar las formas que adquirió la acción colectiva de las trabajadoras de la educación entre 1966 y 1973 en Santa Fe y sus zonas de influencia, período histórico donde muchas docentes comenzaron a reconocerse como trabajadoras asalariadas, lo cual impactó en la forma de entender la organización gremial y las prácticas sindicales, entrando en abierta contradicción con las ideas de apostolado, vocación y profesionalismo con las que se identificaba la mayoría.

Enfoque teórico-metodológico

Investigar sobre las acciones colectivas y la conflictividad social demanda necesariamente dar cuenta de cómo se entiende la relación entre acción social y sociedad, entre acción humana y contextos estructurales e históricos, ya que de acuerdo a la forma en que se conciba dicha relación serán las construcciones explicativas y metodológicas que se realicen. En este sentido, tres de los grandes referentes – McAdam, Tarrow y Tilly- (2005) que se han dedicado a estudiar los movimientos sociales, plantean la necesidad de superar las controversias entre racionalistas, estructuralistas y culturalistas a partir un *enfoque relacional y dinámico* que atienda a la interacción entre actores, instituciones y corrientes de contienda política.

Esta perspectiva resulta sumamente fructífera para enmarcar las opciones conceptuales y metodológicas, ya que habilita la posibilidad de establecer múltiples relaciones y dinámicas temporales que se dan entre los marcos contextuales/estructurales y las acciones racionales/no racionales de los agentes sociales. Esto implica analizar las interacciones y vínculos sociales no sólo como expresión de una estructura sino como espacios activos de cambio y creación. Es decir, como señala Delgado (2007), se trata de una apuesta por una mirada relacional y dinámica de la acción colectiva que busque reconciliar hacia el centro del esquema los supuestos *racional-no racionales* del problema de la acción y los compromisos *colectivistas-individualistas* del problema del orden.

En este sentido, los referentes teóricos-metodológicos que orientan este trabajo abrevan en la teoría de los movimientos sociales y en la tradición marxista entendida como la plantea Thompson (1981): abierta, exploratoria y autocrítica; porque considero que



ambos enfoques brindan herramientas que permiten describir y explicar las dimensiones estructurales y subjetivas de las acciones colectivas. Se trata (o al menos eso intento) de utilizar y articular conceptos y marcos de análisis de ambas perspectivas, ya que, como bien señala Viguera (2013, p. 14), la acción colectiva no emerge naturalmente de la existencia de un conflicto o antagonismo estructural, sino que el sentido de la misma y sus alcances son producto de una construcción compleja que requiere ser explorada. Y creo que esa exploración demanda la osadía de cruzar barreras disciplinares y de enfoques, aunque se corra el riesgo de ser caratulado de ecléctico.

Adscribiendo a estos lineamientos resulta inevitable –sino deliberado– que la propuesta de investigación adquiera un carácter interdisciplinario en la medida que los opciones conceptuales se inscriben en dos grandes campos disciplinares: producciones provenientes del campo de la historia social (estudios anteriores sobre historia contemporánea argentina de los movimientos sociales y del movimiento obrero) y producciones provenientes del campo de la sociología (estudios sociológicos de los movimientos sociales). En este marco, algunos de los conceptos más relevantes serán los de agentes individuales y colectivos, acción colectiva, contienda política, repertorios de acción, experiencia, estructuras de movilización, organizaciones formales, identidad, intereses, demandas, reivindicaciones, ciclos de protestas, entre otros.

Atendiendo al objeto y al problema que delimita este trabajo, se plantea la necesidad de recurrir a una estrategia metodológica cualitativa, que permita comprender las acciones de los agentes sociales en un contexto socio histórico específico. A partir de la lógica cualitativa se pretende abordar la información empírica relevada en el campo a través de un análisis reflexivo y crítico de las fuentes documentales y orales. Desde esta perspectiva, los conceptos operan como un marco referencial que orienta el proceso de investigación, donde el universo de estudio está conformado por las trabajadoras de la educación de la provincia de Santa Fe.

Los conceptos seleccionados cumplen un carácter heurístico, en tanto implican un grado de abstracción que permiten comprender y conocer la realidad social, lo que no supone que dichos conceptos definan mecánicamente a la realidad misma. Esta observación resulta fundamental, ya que siempre se corre el riesgo de caer en una trampa discursiva donde los conceptos se configuran como si fueran los acontecimientos reales. En esto coincido con Thompson (1981, p. 95) cuando señala que debe darse un diálogo entre los datos empíricos y los conceptos, para lo cual, estos últimos deben ser flexibles, con



la suficiente elasticidad y generalidad para llevar a cabo el análisis de lo empírico, presentándose “como expectativa más que como regla”.

Es decir, no existe posibilidad de reconstrucción histórica sin considerar la historia “real” materializada a través de los datos empíricos. En este sentido, se hace necesaria una reconstrucción de los principales episodios de acciones colectivas, en tanto pueden ser contados, medidos y objetivados como eventos o acontecimientos generados por los agentes sociales. Se procurará articular la descripción y narración con el análisis a partir del utillaje conceptual a los fines de explicar su desarrollo y desenlace, procurando indicar los cambios y las continuidades que en dicha reconstrucción se pueden reconocer en la organización, en los formatos de acción, en las identidades, en las configuraciones estructurales (contextuales) y en las demandas de los agentes sociales.

Las fuentes de información que se consultaron son materiales de divulgación colectiva elaborados por las asociaciones gremiales representantes de los docentes de la provincia de Santa Fe (publicaciones sindicales realizadas en la prensa local, volantes y actas encontradas en archivos de algunos de los sindicatos que actuaron durante el período). Por otra parte, en la medida que las acciones colectivas son episodios de la vida social que adquieren una dimensión pública, se relevó información periodística sobre las acciones desarrolladas por las organizaciones sindicales publicadas en la prensa escrita (diarios El Litoral y Nuevo Diario, entre otros). Además, con el objetivo de triangular múltiples registros de las acciones llevadas a cabo por el colectivo en cuestión, se realizaron entrevistas a algunas docentes que participaron de las principales acciones colectivas desarrolladas entre 1966 y 1973 en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de reconstruir las experiencias compartidas que configuraron sus identidades.

Las experiencias de lucha y las organizaciones sindicales entre finales de la década del cincuenta y comienzos del setenta

La estructura de movilización de las trabajadoras de la educación en la provincia de Santa Fe estuvo conformada por organizaciones sindicales de alcance nacional, provincial o local. Algunos de estos sindicatos se agruparon en entidades nacionales más o menos estructuradas¹ y que se desplegaron de manera más sistemática a partir de la década del cincuenta. Los sindicatos de alcance nacional actuaban directamente a través de sus filiales en las escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la Nación. En las escuelas primarias y secundarias tuvieron influencia la Asociación de Profesores Diplomados de Santa Fe que integraba la Confederación Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP), la Asociación de Maestros Láinez (agrupada en la



Federación de Maestros de Escuelas Láinez de la provincia de Santa Fe - FEMEL), la Asociación Gremial de Educadores de Santa Fe (AGESF) que aglutinaba a maestros primarios e integraba la Federación de Asociaciones Gremiales de Educadores (FAGE), de orientación católica. También actuó la Unión de Docentes Argentinos (UDA) ² y la Asociación de Maestros de Enseñanza Práctica (AMEP)³. Mientras que en la Escuela Industrial, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral existía una asociación específica, la Asociación de Docentes de la Escuela Industrial Superior (ADEIS) y que integraba en el plano nacional la Federación de Establecimientos de Enseñanza Media de Universidades Nacionales (Diario El Litoral de Santa Fe, 18/08/1972).

En las escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, los sindicatos docentes con mayor inserción y organización fueron la Federación Provincial del Magisterio y la Asociación del Magisterio Católico, al menos hasta principios de 1972, cuyos representados eran en su mayoría docentes de escuelas primarias. De las dos organizaciones, la de mayor peso a nivel provincial era la Federación Provincial del Magisterio. No obstante, hubo otros pequeños sindicatos: la Asociación de Maestros de Enseñanza Manual, la Asociación de Educadores Particulares y la Asociación Santafesina de Docentes y Administrativos de la Enseñanza Media, Especial y Superior (ASDAEMES)⁴. Ésta última fue la más importante, tanto por su grado de influencia como por el rol que jugó sindical y políticamente durante este período, en la medida que se presentaba como organización alternativa a las otras asociaciones, con una fuerte presencia de docentes jóvenes y de formación universitaria.

Todas estas organizaciones sindicales, con excepción de ASDAEMES, se aglutinaron entre 1966 y 1971 en la Comisión Pro Mejoras Económicas del Magisterio de Santa Fe. La misma estaba conformada por una Comisión Central con sede en la ciudad de Santa Fe y Subcomisiones departamentales con sede en las ciudades cabeceras de cada departamento. La Comisión Pro Mejoras fue un eslabón fundamental de la estructura de movilización de las trabajadoras de la educación, en tanto actuaba como una instancia de acuerdos y coordinación de carácter intersindical en la que la Federación Provincial del Magisterio y la Asociación del Magisterio Católico ejercían un rol hegemónico.

En lo que refiere a las demandas principales del período, se pueden reconocer reivindicaciones económicas, laborales-previsionales, educativas y políticas. La actualización salarial fue una demanda permanente durante todo el gobierno dictatorial. El reclamo de aumento salarial se fue agudizando en relación directamente proporcional a las políticas de racionalización y reestructuración económica implementadas tanto en



el Estado provincial como nacional. Otra reivindicación importante giraba en torno al atraso en el pago de los sueldos que se producían en los departamentos del interior de la provincia y que afectaba a todas las trabajadoras docentes. No obstante, las más afectadas eran las trabajadoras docentes interinas y reemplazantes, ya que estos atrasos se acumulaban y generaban deudas cuantiosas. En este sentido, el pago de las deudas pendientes a docentes suplentes se fue convirtiendo en la principal demanda que preocupó a las trabajadoras de la educación.

Las demandas políticas y educativas respondieron en gran medida a la creciente centralización del poder por parte de las autoridades ministeriales, a la política de racionalización económica aplicada a los organismos del Estado, a la represión y a las innumerables reformas que se impulsaron, tanto desde el gobierno nacional como provincial, que modificaban cualitativamente la estructura del sistema educativo provincial como la normativa vigente hasta ese momento. En este sentido, entre las reivindicaciones más importantes de estos años están las transferencias de las escuelas primarias nacionales y el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación. A inicios de 1969, la Asociación del Magisterio de Santa Fe, la Federación del Magisterio de Santa Fe, la Federación y Asociación de Maestros Láinez, la Asociación Santafesina de Docentes y Administrativos de Enseñanza Media, Superior y Especial, la Asociación de Profesores del Instituto del Profesorado Básico, entre otras organizaciones cuestionaron que en la nueva ley se limitara la gratuidad, se alterara la obligatoriedad escolar, se promoviera la educación confesional y privada⁵, se abandonara la educación pública para colocarla como actividad subsidiaria. Sin embargo, la Asociación del Magisterio Católico y la Asociación de Educadores Particulares acordaban con el establecimiento de una nueva ley, ya que entendían necesario reemplazar normas de casi cien años de antigüedad para construir un “sistema nuevo y de avanzada”. (Diario El Litoral de Santa Fe, 13/12/1968) Para canalizar y tomar medidas colectivas a los fines de lograr las reivindicaciones que se planteaban, por lo general las organizaciones sindicales convocaban a asambleas más o menos amplias, cuya masividad dependía en gran medida del grado de descontento que había entre las trabajadoras docentes. En algunas oportunidades la Comisión Pro Mejoras, realizaba “asambleas de delegados” de los distintos sindicatos que la integraban. En todas estas instancias de carácter participativo y resolutorio se producían importantes debates donde se planteaban las demandas, se argumentaba y se definían las acciones o medidas a tomar para lograr los objetivos del conjunto.



Para visibilizar públicamente las demandas y reivindicaciones utilizaron como principales repertorios de acción a la entrevista con los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura y la difusión de sus objetivos a través de los medios de comunicación. Se entregaban “extensos memoriales” donde se puntualizaban las cuestiones que afectaban al gremio docente y se fundamentaba el pedido y el reclamo. Los mecanismos de decisión eran más o menos los mismos: los dirigentes informaban a las bases sobre las gestiones realizadas ante las autoridades, posteriormente se discutía la situación y las medidas a tomar en el marco de asambleas convocadas a través de los medios o por canales informales. Finalmente se tomaban resoluciones donde se establecían considerandos y acciones. Los considerandos operaban como argumentos políticos, económicos y educativos, que además de fundamentar las posiciones que se adoptaban, operaba como vehiculizador de discursos y prácticas compartidas.

Para potenciar la difusión de estos discursos y prácticas, se utilizaban los medios de comunicación, que además de jugar un papel fundamental como mecanismo de transmisión entre los dirigentes y las bases, también permitió construir empatía con los padres y otras organizaciones, en función de cimentar lazos de solidaridad y alianzas. De esta manera, se expresaba una contienda política contenida, en la cual se reclamaban reivindicaciones para el sector, matizando con posiciones que tendían a conciliar y a buscar salidas consensuadas, tratando de evitar la confrontación. Esta búsqueda permanente de consenso a través de instancias de negociación caracterizó a la contienda política entre las trabajadoras de la educación y el gobierno en los primeros años del régimen. Se hizo habitual declarar al gremio docente en “estado de alerta” y “asamblea permanente” (Diario El Litoral de Santa Fe, 27/01/1968), lo que se transformó en una acción colectiva institucionalizada y convencional, que de hecho no implicó desafíos al poder, aunque no dejaba de ser un claro indicio del creciente descontento que generaba, especialmente, las demandas salariales insatisfechas.

Aunque la reforma educativa incrementó ciertamente los conflictos tanto a nivel nacional como provincial, lo salarial fue uno de los problemas más importantes, que se agudizó en los inicios de los años setenta en la provincia de Santa Fe, al menos en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, las deudas pendientes y el atraso en el pago de salarios a reemplazantes e interinos, que había sido motivo de reivindicaciones en distintos memoriales y entrevistas entre 1966 y 1969 y que seguía sin solución, al punto que generaba procesos de movilización de los afectados con cierto grado de autonomía y



autoconvocatoria por fuera de las organizaciones formales. En segundo lugar, el reajuste salarial fue adquiriendo mayor significatividad entre finales de 1970 y comienzo de 1971. Efectivamente, las demandas se anclaban en el gran deterioro salarial que venían sufriendo las trabajadoras docentes desde los años anteriores y que se agudizaron a partir de 1970 producto del creciente proceso inflacionario.

En el marco de las políticas educativas que proponía el gobierno y en las deterioradas condiciones salariales y laborales, las acciones y la respuesta sindical adquirió mayor cohesión y virulencia. Luego de la huelga nacional de noviembre de 1970 convocada por el AND, se sucedieron durante 1971 y 1972 huelgas de 24, 48 y 72 horas contra la reforma combinada con “semanas de protestas” (Vázquez, S. y Balduzzi, J., 2000, 69), con una importante adhesión a nivel nacional de docentes y estudiantes que se sumaron a diferentes movilizaciones realizadas en la ciudad de Buenos Aires, con discursos y acciones antiimperialistas que se materializaron, por ejemplo, en la quema de banderas norteamericanas (Nuevo Diario de Santa Fe, 05/05/1971). Este proceso adquirió una fuerza inusitada entre 1970 y 1973, y que en parte se explicaba por la oportunidad política que abrió el Cordobazo de 1969, en tanto puso en evidencia la debilidad del gobierno militar ante las acciones colectivas que tendían a generalizarse y expandirse.

En la provincia de Santa Fe, las reivindicaciones pendientes de solución planteadas en diferentes instancias de diálogo a nivel provincial combinada con la crítica creciente que generaba la aplicación de la reforma educativa nacional fueron marcando el ritmo de los conflictos entre las asociaciones gremiales y el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, así como entre las organizaciones nacionales y la Secretaría de Educación y Cultura de la Nación. El retraso en el pago salarial, las deudas pendientes de reemplazantes e interinos, la reforma educativa, la implementación de la escuela intermedia, el progresivo deterioro de la situación del sistema educativo en general⁶ y de las condiciones de vida producto de la inflación, fueron las raíces más profundas de los demandas y de los conflictos planteados a partir de 1970, y que en el caso santafesino alcanzaron su cenit con la huelga por tiempo indeterminado, que con intermitencias, se desarrolló entre marzo y junio de 1971.

Esta combinación de causas de corto y mediano plazo en el marco de una permanente política dilatoria por parte del gobierno para abordar la problemática de las trabajadoras docentes y su consecuente pérdida de legitimidad, terminaron disipando cualquier posibilidad de consenso dejando el espacio abierto a la confrontación. En este contexto, los docentes decidieron llevar a cabo un plan de lucha que habían resuelto en la



Asamblea provincial de la Federación del Magisterio del 19 de diciembre de 1970 y ratificado en los primeros días de Marzo de 1971. En la resolución se habían definido llevar a cabo paros totales de actividades en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles y jerarquías, durante los días 16, 17, 23, 24 y 25 de marzo. Ante el fracaso de las negociaciones se decidió vía asambleas un paro por tiempo indeterminado el 17 de mayo de 1971. La huelga se inició con un paro total de actividades en las escuelas primarias, de enseñanza manual, técnica, en escuelas privadas y en escuelas de educación secundaria dependientes de la provincia. (Diario El Litoral de Santa Fe, 17/05/1971).

La participación activa de un gran número de trabajadoras de la educación en la provincia fue muy importante, y esto se puede reconocer en fotos y en testimonios de los actores que participaron de las mismas. Una de las entrevistadas señala:

Se hicieron movilizaciones históricas. En esos tiempos no había peatonal. Entonces, generalmente nos reuníamos en algún lugar de Boulevard Gálvez donde acudían los docentes de diferentes puntos de la ciudad, del interior, del área metropolitana. Me estoy refiriendo a Paiva, Santo Tomé... Algunas veces se hacían movilizaciones provinciales. Con lo cual venían los docentes de todos los niveles y modalidades, desde el norte extremo al sur, y del este al oeste en general. Fueron realmente movilizaciones históricas.” (Entrevista a CN, 19/04/2012)

La huelga se mantuvo por treinta y seis días ininterrumpidos con diversas movilizaciones y acciones en las calles. Con una participación activa de docentes, se pusieron en práctica diversos repertorios de acción tendientes a mantener los días de huelga: asambleas, movilizaciones, concentraciones, reuniones con padres y estudiantes, caravanas de automóviles, reuniones con sindicatos, etc. Las asambleas de trabajadoras docentes fue uno de los principales repertorios de acción implementados por los sindicatos para sostener y fortalecer la unidad y solidaridad del movimiento. Eran instancias de participación masiva donde se podían expresar las distintas posiciones y tomar resoluciones de conjunto que aseguraran la medida, lo cual generó que muchas de estas asambleas fueran extensas temporalmente, rompiendo con las rutinas cotidianas habituales. Una de las entrevistadas recordaba que

las asambleas eran impresionantes. Había que alquilar equipos para hablar por micrófono porque las hacíamos en Regatas, en la Unión Ferroviaria. Eran impresionantes. Pero claro, duraban tantas horas porque todo el mundo quería decir lo suyo. A veces se reiteraba, se repetía. Yo he estado en asambleas que empezaron a las



10 de la mañana y terminaron a las 4 o 5 de la mañana. Una vez llegué a las 6 y mi marido me preguntó de dónde venís... de la asamblea.” (Entrevista a CN, 19/04/2012)

Se produjo una importante solidaridad y participación activa de otros sectores sociales que apoyaron a las docentes durante el conflicto. Varias fueron las organizaciones gremiales e instituciones de la sociedad santafesina que adhirieron a la medida solidarizándose a través de los medios o participando activamente en las diferentes actividades organizadas por la Comisión Pro Mejoras. Una de las organizaciones que brindó su apoyo fue la CGT. El acercamiento y la unidad con la Central Obrera que se gestó durante el conflicto se expresaron en la participación de sectores del movimiento obrero en distintas acciones realizadas de manera conjunta. El grado de solidaridad de las organizaciones de trabajadores locales con la huelga docente se evidenció en la utilización de locales de la Unión Ferroviaria, ASOEM (Asociación de Obreros y Empleados Municipales) y UTEDyC (Unión Trabajadores Entidades Deportivas y Civiles) para llevar a cabo las multitudinarias asambleas del Departamento La Capital. También se manifestó la Federación de Cooperadores Escolares que en distintos momentos intervino enviando telegramas a organismos nacionales, entrevistándose con el Ministro de Educación y Cultura y con el Gobierno Provincial; organizaciones barriales como la Federación Santafesina de Entidades Vecinales, la Asociación Vecinal “República los Hornos” y Comisión Directiva de la Sociedad Vecinal “Unión y Trabajo”.

Además se manifestaron a favor del movimiento de protesta los estudiantes y ex alumnos, padres y organizaciones políticas. Estas manifestaciones de apoyo eran activas, ya que participaban de los actos y movilizaciones o bien emitían declaraciones que eran publicadas en la prensa local: Nuevo Diario y Diario El Litoral. Algunos centros de estudiantes secundarios, el centro de estudiantes del Profesorado, el Movimiento Ateneísta de Estudiantes, la Juventud del MID, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento de la Juventud Peronista, son algunas de las organizaciones que aparecen nombradas.⁷

La incidencia política de estos sectores se materializó en carteles y cánticos que se entonaron en las movilizaciones. En los mismos se hacía eje en la unidad de trabajadores y estudiantes, propios de una época donde esta amalgama se vivía como una alternativa potencial y promisorio para enfrentar el poder dictatorial y la represión; en problemáticas comunes que unificaba a diferentes sectores en lucha, más allá de los problemas específicos de las trabajadoras de la educación.⁸ Entre las reivindicaciones propias de las docentes se colaban otras demandas más políticas y generales que



cuestionaban al régimen: “La violencia no frena nuestra lucha”; “Maestros en la lucha unidos ¡Adelante!”, “luce, luce, luce; no deje de luchar, que la lucha docente es lucha popular”; “Maestros, obreros y estudiantes, unidos adelante”; “Repudiamos la traición, los maestros en acción”; “El pueblo nos anima, el ministro nos intima”; “Menos represión, más educación”; “Libros sí, botas no”; “Los maestros piden salarios justos”; “Escuelas y maestros queremos presupuesto” Es decir, el tono que adquirió la contienda política durante el paro por tiempo indeterminado resultó más confrontativa, en la medida que se sumaron otros sectores a la protesta, endureciendo las posiciones y profundizando la distancia entre el gobierno y la Comisión Pro Mejoras.

La huelga se suspendió el día miércoles 23 de junio, luego de más de un mes de paro. A la asamblea provincial habían asistido delegados de todos los departamentos de la provincia. Durante la asamblea se expresaron dos posiciones claramente diferenciadas: aquellos partidarios de continuar con la medida y quienes planteaban levantar el paro. La resolución que implicó la aceptación de las condiciones planteadas por el gobierno y la decisión de poner fin a la huelga, generó claras diferencias entre las docentes del sur provincial y las del centro-norte. Las primeras más combativas y decididas a continuar con las medidas de fuerza venían de un proceso en el cual había tenido un importante papel la conformación de un Comité de Huelga en el que participaron maestras y profesoras jóvenes. Sin embargo, militantes de estas características que se sumaban por primera vez a la acción gremial también aparecieron en distintas localidades de la provincia que hacia finales de 1971 y durante 1972 fueron conformando nuevas organizaciones con otro perfil sindical y político.

La conformación de nuevas organizaciones sindicales en el marco de la profundización de la contienda política

La huelga que se llevó a cabo entre marzo y junio de 1971 impactó fuertemente en la estructura de movilización que había organizado las protestas entre 1966 y 1971, ya que en el seno de la Comisión Pro Mejoras se plantearon una serie de cuestionamientos que abrió un proceso de crisis y de fractura entre las organizaciones participantes, producto de los cuestionamientos respecto del funcionamiento y ante los malogrados resultados que se habían obtenido en el conflicto. La Asociación del Magisterio Católico, ASDAEMES y docentes independientes y reemplazantes decidieron retirar sus delegadas de la Comisión Central Pro Mejoras y generar una nueva instancia de coordinación con el objetivo de construir una organización que reuniese a todos los sectores docentes (primarios, secundarios, terciarios). En cierta medida, lo que se



estaba materializando era el resultado de un proceso de experiencia política y sindical que llevó a muchas trabajadoras docentes a identificarse con prácticas propias del movimiento obrero y a plantearse la construcción de un sindicato unificado.

En 1972 se formó la Comisión de Reorganización Gremial de los Trabajadores de la Educación del Departamento La Capital en el contexto de la lucha que se estaba planteando a nivel nacional desde el ADN y la CUTE ⁹. En palabras de sus propios fundadores, la Comisión no se conformó como una entidad gremial, sino como una

...comisión que junto con el personal escolar del resto provincial está buscando una organización de acuerdo con el deseo de los docentes. Hoy en la provincia están formados los siguientes sindicatos regionales: Rosario, Castellanos, San Gerónimo, Venado Tuerto, Villa Constitución y Sindicato de los Trabajadores de la Educación del Norte... (Diario El Litoral de Santa Fe, 15/06/1972).

El nombre “Comisión de Reorganización Gremial de los Trabajadores de la Educación” expresaba una doble fractura con la concepción de la Comisión Pro Mejoras, al menos en el plano discursivo: fractura histórica y refundacional, ya que se planteaba volver a organizar gremialmente a las docentes con otro formato sindical; y fractura conceptual identitaria, en tanto se reivindicaban como trabajadores de la educación, entrando en tensión con una tradición de carácter profesionalista y misional.

Estas tendencias que se gestaron en la experiencia sindical y política de finales de la década del sesenta, se cristalizó a finales de 1971 y principios de 1972 en la creación de nuevos sindicatos. El 31 de agosto de 1972 se conformó el Sindicato Único de Trabajadores de Santa Fe, conocido posteriormente como el SINTES, que por otra parte, emulaba al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Rosario (SINTER), fundado el 22 de octubre de 1971 y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Norte (SUTEN) con sede en la ciudad de Reconquista. También se pueden reconocer el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) del Departamento Iriondo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITE) del Departamento San Jerónimo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITES) del Departamento Castellanos, Trabajadores de la Educación del Departamento San Martín, Sindicato de la Educación del Departamento Belgrano, el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SUTE) del Departamento General López, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Constitución (SITEC) del Departamento Constitución, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de San Lorenzo (SITES) del Departamento San Lorenzo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Caseros.



Todos ellos agrupados en la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores de la Educación (FUSTE) a nivel provincial y en la CUTE a nivel nacional. Evidentemente no era un proceso aislado, fue la expresión de los desacuerdos con las conducciones de ese momento -a nivel nacional con el AND y en la provincia de Santa Fe, con la Federación Provincial del Magisterio y la Comisión Pro Mejoras-, de nuevas concepciones respecto del rol del docente y de sus organizaciones gremiales.

El SINTES se formó en Santa Fe durante las huelgas aisladas que se produjeron entre mayo y agosto de 1972. Las diferencias con la Asociación del Magisterio de Santa Fe y la Federación Provincial a nivel local y con el ADN a nivel nacional, llevó a un sector importante de docentes a conformar el nuevo sindicato con importantes diferencias respecto de los postulados exclusivamente reivindicativos de la Comisión Pro Mejoras, ya que se proponían objetivos más políticos que excedían la mera reivindicación sectorial. En este sentido, los objetivos que se propusieron eran:

...agrupar a la gente que trabaja en educación por encima de diferencias religiosas, políticas, económicas o de otra índole. Queremos que nuestro sindicato tenga por objetivos no sólo los intereses salariales y sociales de los asociados, sino también que esté al servicio de las transformaciones que deben hacerse en el sistema educativo para que responda a las exigencias de la mayoría de los argentinos. Porque una asociación sindical no puede estar ajena a la vida y los problemas del país...” (Diario El Litoral de Santa Fe, 31/08/1972).

Una característica fundamental de este nuevo Sindicato refería a los asociados, ya que eran bastante amplios en los criterios que definían a sus integrantes en la medida que incluían a trabajadores docentes estatales o privados; de jurisdicciones nacional, provincial o municipal; de nivel primario, secundario, intermedio, superior o técnico; trabajadores educacionales, administrativos y de servicio que no debían ser necesariamente docentes. Al respecto, una entrevistada recordaba que ella había ido a “...una sola reunión del SINTES, previa a la organización, y había porteros, secretarios. Es decir, ellos pretendían que todo el personal que trabajaba en las escuelas se nucleara en un mismo sindicato.” (Entrevista a GM, 22/01/2010)

En el mismo sentido, una integrante del SINTES recordaba que querían impulsar un sindicato único en educación de la misma manera que existían sindicatos por ramas de producción, partiendo del supuesto de que los docentes eran trabajadores (Entrevista a AL, 07/07/2006). La primera Comisión que se formó estaba integrada por militantes que respondían a las otras organizaciones que venían actuando desde hacía varios años



(ASDAEMES, ADEMIP, AEP, Magisterio Católico), lo que implicaba la aceptación de una doble pertenencia institucional.

Estas organizaciones sindicales adquirieron mucho protagonismo en la provincia de Santa Fe entre 1972 y 1976, cuestión que se puso en evidencia en el crecimiento de docentes afiliados que tuvo la FUSTE durante estos años (Alonso, L., 2007). Ésta fue una federación influenciada por jóvenes militantes vinculados a organizaciones políticas más radicalizadas, -muchos de ellos perseguidos y desaparecidos por la dictadura a partir de 1976- y que se presentaba como alternativa a la Asociación del Magisterio y la Federación Provincial del Magisterio, cuyos rechazos recíprocos eran la expresión de profundas diferencias políticas e ideológicas respecto de la forma de actuar y organizar el sindicato. No obstante, las distancias políticas no les impidieron actuar en determinadas circunstancias de manera conjunta ante políticas del gobierno (Diario El Litoral de Santa Fe, 25/11/1973).

La lucha y experiencia sindical acumulada en las calles se trasladó al interior de las organizaciones sindicales, donde el debate en torno a la construcción de una única central de trabajadores docentes a nivel nacional adquirió centralidad y signó los últimos meses de 1973. En esta empresa se concentraron la mayoría de los sindicatos nacionales, provinciales y locales del país. La provincia de Santa Fe no fue ajena a este proceso, y los sindicatos con mayor inserción en la docencia santafesina participaron de los distintos encuentros donde se informaba y discutía sobre las características y objetivos del proceso de unificación. (Diario El Litoral de Santa Fe, 29/07/1973). En general, la gran mayoría de las organizaciones sindicales provinciales, así como los aglutinamientos nacionales -el AND y la CUTE- expresaban un proceso de unidad signado por acciones y discursos identificados con el movimiento obrero, que tuvieron una amplia influencia entre 1972 y 1973, configurando una acumulación de experiencia organizativa que dio origen a la mayor organización nacional de trabajadores docentes: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Los principios marcaron una identidad como trabajadoras que expresó posicionamientos de corte más clasista y vinculados al sindicalismo combativo¹⁰.

Reflexiones finales

En general, se puede señalar que en los primeros años del gobierno militar que se inició en 1966 primó la negociación en las relaciones entre el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia y la Comisión Pro Mejoras Económicas del Magisterio de Santa Fe a través de entrevistas y reclamos públicos en la prensa. En este sentido, el gobierno



contaba con una importante legitimidad en la sociedad y particularmente entre los docentes, lo que en cierta medida explica la permanente búsqueda de acuerdos a través del diálogo. Por otra parte, posiblemente esta legitimidad de los primeros años de la dictadura, privaba a los docentes de contar con oportunidades políticas propicias para el desarrollo de otros repertorios de acción colectiva que permitieran lograr los objetivos planteados.

¿Cómo se explica el cambio de actitud de un sector de la docencia santafesina hacia 1971? Después del análisis es posible establecer múltiples causas. Por un lado, las acciones de los docentes santafesinos eran parte de un proceso de protestas que se había extendido en varias provincias, por la reforma educativa que el gobierno intentaba llevar a cabo desde 1968 a través de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación, por la inflación progresiva que afectaba los ingresos salariales de la mayoría de los trabajadores y por la creciente deslegitimación política del régimen dictatorial. Por otro lado estaba la falta de respuesta a demandas específicas que los docentes venían reclamando a las autoridades provinciales desde hacía varios años: deudas pendientes con docentes interinos-reemplazantes, atraso en el pago de sueldos a docentes reemplazantes y del interior de la provincia y el aumento salarial.

En este marco, la huelga por tiempo indeterminado se constituyó en una experiencia inédita para el colectivo docente por varias razones: por la extensión y el grado de confrontación que adquirió, por el acercamiento y las actividades conjuntas que se realizaron con otros sindicatos de trabajadores, por las asambleas masivas con poder de decisión colectivo, por la movilización social y la solidaridad que generó en amplios sectores de la sociedad, por la constitución de fondos de huelga, por las relaciones con padres, estudiantes y organizaciones políticas, por las cesantías y los descuentos salariales. Todas estas experiencias implicaron procesos de aprendizaje de nuevos valores distintos de los que tradicionalmente habían impregnado las prácticas de los docentes.

En general, durante estos años se evidencia un alto proceso de sindicalización y una gran participación de jóvenes que se veían impregnados por nuevas prácticas políticas que contribuyeron a la conformación de identidades más vinculadas a los trabajadores; proceso que se verá potenciado por prácticas pedagógicas en barrios, villas miserias, comunidades rurales (Ríos, 2009). En este sentido, la influencia de la militancia barrial fue destacada por varias entrevistadas, quienes señalaban la importancia de la



militancia social vinculada a la iglesia y la presencia de bibliotecas populares en las vecinales. (Entrevista a GC, 21/04/2006).

Por último, considero importante señalar que, aunque la movilización social adquirió por momentos cierta virulencia, la confrontación con el gobierno no generó el desarrollo de una concepción clasista y de una crítica social que abarcara aspectos estructurales. Solo se atrevió a enfrentar al régimen político en la medida que se dieron las circunstancias políticas oportunas y propicias¹¹. No obstante, la elaboración de discursos compartidos que justificaron los reclamos y la experiencia de acontecimientos y de relaciones interpersonales producidos durante el conflicto, coadyuvaron a configurar una identidad como trabajadores que –aunque no compartida por todo el colectivo docente– comenzaba a poner en tensión fuertes representaciones ancladas en las ideas de vocación y profesionalismo.

Notas

¹ En Abril de 1960 se formó la Junta Docente de Acción Gremial; en 1961 el Comité Unificador Docente de Acción Gremial (CUDAG) integrado por la Federación de Asociaciones Gremiales de Educadores (FAGE), la Confederación Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP), la Comisión Coordinadora Intersindical Docente (CCID) y la Unión Nacional de Educadores (UNE); en 1967 se creó la Confederación General de Educadores de la República Argentina (CGERA); en 1970 el Acuerdo de Nucleamientos Docentes (AND); en 1972 la Central de los Trabajadores de la Educación (CUTE) y finalmente la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (CTERA) en 1973 (Ver Donaire, 2009; Gindin, 2011; Vázquez, 2008).

² La UDA fue una organización signada desde su fundación por el peronismo. Creada en 1953 por pedido del Gral. Perón, fue intervenida y suspendida su actuación en 1958. Recién se reorganizó en enero de 1973. Por lo tanto, su actuación en el período que se analiza en este trabajo es muy acotado, teniendo un mayor protagonismo a partir de 1973.

³ En noviembre de 1973 esta asociación cambiaría su nombre por AMET (Asociación de Maestros de Enseñanza Técnica), que es con el nombre que actualmente se la reconoce.

⁴ Sobre un total de 16000 docentes, ASDAEMES tenía 800 afiliados hacia 1971, según el informe confidencial sobre la organización realizada por la Dirección de Informaciones de la Provincia de Santa Fe. En Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, Unidad de conservación 412A, Legajo 6, consultado el 26/04/17.



⁵ El anteproyecto de Ley reconocía en su artículo 1º la existencia en el sistema federal de una “educación pública de iniciativa estatal y una “educación pública de iniciativa no estatal”. Esto significaba un reconocimiento explícito de la educación privada y una equiparación con la educación pública

⁶ Como ejemplo del deterioro se puede citar la reducción que sufrió el gasto público nacional en educación. Del 17.3% en 1965 se redujo al 13,3 en 1972. Datos extraídos del Diario El Litoral de Santa Fe, 13/03/73.

⁷ Ver Nuevo Diario y Diario El Litoral de los meses de mayo y junio de 1971.

⁸ Ver Nuevo Diario, 19/05/1971 y Diario El Litoral, 18/06/1971.

⁹ La conformación de la Central de los Trabajadores de la Educación (CUTE) en 1972 se produjo en un contexto signado por la intensificación de la conflictividad. Pretendían una unificación nacional más acelerada y una vinculación más estrecha con el movimiento obrero. A esta organización adscribieron el Sindicato del Magisterio de Mendoza, la Federaciones de La Pampa y Río Negro, representantes de base de Santa Cruz, Neuquén, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones, San Luis, San Juan, SINTER de Rosario, docentes privados de Córdoba, los distritos de Almirante Brown, General Sarmiento, Matanza y San Isidro de la provincia de Buenos Aires. La conformación de la CUTE se había realizado en el local de Luz y Fuerza de Córdoba, lo que daba cuenta de la relación que mantenía este agrupamiento docente con los sectores clasistas y combativos del movimiento obrero.

¹⁰ Declaración de principios y Estatuto de la CTERA. Recuperado de: <https://puntodocente.wordpress.com/fuentes-historicas/>. 15/06/2019.

¹¹ Según Tarrow (1997, p. 167), las acciones colectivas surgen y adoptan una forma u otra cuando se amplían de acuerdo a las oportunidades políticas, a las posibilidades de encontrar aliados potenciales, cuando se muestran vulnerables los oponentes, por la cohesión o división de las élites dominantes.

Bibliografía

Alonso, F. (2008). “Testimonios en conflicto... Disputas en el campo gremial de la docencia de la ciudad de Santa Fe entre fines de la década del 60 y comienzos de la última dictadura”. En *Revista de signos y sentidos/cuaderno del proyecto. Entrevista y narrativa en investigación social*, Año 4, Nº 7, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, Santa Fe.



Alonso, L. (2007). Mujeres militantes en la historia del gremialismo docente. En Ríos, Guillermo (comp.) (2007). *La cita secreta: encuentros y desencuentros entre memoria y educación*. Santa Fe: Ediciones AMSAFE.

Alonso, Luciano J. P. (2017). "Las estrategias de la UPCN Santa Fe y sus posicionamientos institucionales, c. 1970-1984" en Vega, Natalia y Alonso, Luciano (2017). *Lugares de lo colectivo en la historia local*. Santa Fe: María Muratore Ediciones.

Ascolani, A. (1999). "¿Apóstoles laicos, burocracia estatal o sindicalistas? Dilemas y prácticas del gremialismo docente en Argentina (1916-1943)". En *Anuario Sociedad Argentina de Historia de la Educación*, N° 2.

Donaire, R. (2009). "¿Desaparición o difusión de la identidad de clase trabajadora? Reflexiones a partir del análisis de elementos de percepción de clase entre docentes". En Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Buenos Aires.

Gindin, J. (comp.) (2011). *Pensar las prácticas sindicales docentes*. Buenos Aires: Ediciones Herramienta.

McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, C., *Dinámica de la contienda política*, Editorial Hacer, Barcelona, 2005.

Ríos, Guillermo A. (2007). "La memoria des-tabicada: política y pedagogía en los primeros '70". En Ríos, Guillermo (comp.) (2007). *La cita secreta: encuentros y desencuentros entre memoria y educación*. Santa Fe: Ediciones AMSAFE.

Tarrow, S. (1997), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid: Alianza Editorial.

Thompson, E. P. (1981). *Miseria de la teoría*, Barcelona: Ed. Crítica.

Tilly, C. (2000). "Acción colectiva" en Apuntes de Investigación del CECYP N° 6, Buenos Aires.

Vázquez, S, A. (2008). "Las identidades laborales de los docentes y la acción político-sindical"

Trabajo presentado en VII Seminario redestrado – Nuevas regulaciones en América Latina. Buenos Aires. Recuperado de:

<file:///E:/Descargas/Ponencia%20Silvia%20Vazquez%20

(1).pdf>

Viguera, A. (2009). "Movimientos sociales y lucha de clases" en Revista Conflicto Social, Año 2.



Narcotráfico, máquinas de guerra y acción colectiva rural en la región Centro de Guerrero 2013-2017.

Daniel Gatica Polco

Resumen

El presente texto se inserta en los estudios sobre procesos de organización, formas de lucha y nuevos repertorios de acción. En él se analiza como la guerra contra el narcotráfico (2006-2018) desarrollada en México encubre procesos estructurales de violencia capitalista. En un segundo momento, se explica como el desbordamiento de la violencia ha reconfigurado los territorios rurales de la región Centro de Guerrero en geografías del terror. En esta trama de territorialidades superpuestas se expone como los actores de la criminalidad ejercen una cualidad de sujetos cambiaformas. Por último, se describe como en este contexto de violencia la acción colectiva de la defensa comunitaria se conforma en tres casos de estudio empírico que van del periodo 2013-2017.

Palabras clave

Narcotráfico; Micro guerras del capital; Defensa comunitaria; Maquinas de guerra.

Introducción

En México el año 2013 es un momento paradigmático entorno a la emergencia armada no solo en Guerrero sino también en otros estados como Michoacán. Los procesos de policías comunitarias y autodefensas surgidos en México desde ese año (y en algunas regiones de Guerrero y Michoacán prolongados hasta la actualidad) son formas organizativas y de acción colectiva heterogéneas, complejas, multidimensionales, específicas y con contradicciones que han emergido como respuestas ciudadanas ante la aguda crisis de seguridad nacional, violencias y agravios de la criminalidad en un contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Así, ante la nueva realidad social de configuración criminalidad-Estado es que sectores de la población guerrerense en la región Centro entre el período 2013-2107 recurrieron a diversas formas de acción colectiva para autoprotegerse: ya fuera desde manifestaciones en las calles o formando grupos armados de seguridad comunitaria; esta irrupción de civiles armados en la región confluyó en la formación de procesos de defensas comunitarias que han oscilado entre autodefensas, policías ciudadanas y policías comunitarias cuya motivación central de acción y organización colectiva ha sido



gestionar una seguridad ciudadana y comunitaria sobre sus propios territorios. En el caso de estudio presente la descripción y análisis se centra en tres procesos organizativos de la región Centro desarrollados entre los años 2013 y 2017; ellos pertenecen a los municipios de Tixtla de Guerrero, Chilapa de Álvarez y Eduardo Neri. Estos procesos nos permiten ver nuevas formas de acción y organización colectiva y mostrar parte de los nuevos entramados socio-territoriales, organizativos, de poder y violencia que han marcado la historia reciente de la región.

Fundamentación del problema

La defensa comunitaria se inserta en los nuevos movimientos sociales donde el sujeto de la acción y organización es heterogéneo y donde el poder Estatal no es el fin de la movilización colectiva. La defensa comunitaria plantea generar cambios a escala local, regional e inmediata, es decir, el tiempo presente, la construcción de sistemas de seguridad comunitaria y la defensa del territorio es lo que determina el ritmo de la acción y la organización colectiva. En este sentido, se analiza la violencia, la criminalidad organizada, el territorio, la acción colectiva y la formación de la defensa comunitaria a partir del problema central ¿Cómo ante la inseguridad y violencia criminal sobre los territorios se han construido experiencias de acción y organización colectiva de defensa comunitaria en la región Centro de Guerrero durante el periodo 2013-2017? A partir de este problema se derivan otras interrogantes secundarias que permean el conjunto del trabajo y son ¿Qué características muestran los territorios a modo de geografías del terror? ¿Qué son los sujetos cambiaformas de maquinas de guerra? ¿Qué especificidad expresa la acción y organización colectiva de la defesa comunitaria en la región?

Metodología

La presente investigación es de tipo cualitativa, mediante un enfoque metodológico explicativo, descriptivo e interpretativo se analizan las experiencias de acción y organización colectiva por parte de actores campesinos, mestizos e indígenas nahuas de tres municipios de la región Centro que han optado por construir procesos organizativos de seguridad comunitaria en un contexto de múltiples violencias de la criminalidad organizada.

Para el caso de estudio del municipios de Tixtla se ha desarrollado un trabajo de campo vía investigación de acompañamiento y de colabor. Cabe referir que en territorios como éste de emergentes violencias armadas sobre el trabajo etnográfico ha implicado ser muy consiente de los riesgos que conlleva caminar y preguntar desde y junto a los sujetos de la defensa comunitaria. En el caso de estudio sobre los procesos de defensa



comunitaria de los municipios de Chilapa y Eduardo Nerí la investigación responde sobre todo ha entrevistas no formales y revisión de notas periodísticas. En general se trata de un estudio exploratorio, ya que la bibliografía académica con respecto al estudio sobre esta región en cuanto al tema de la defensa comunitaria es todavía incipiente.

Capitalismo en México y guerra contra el narcotráfico

El capitalismo y la violencia en la modernidad colonial no pueden existir el uno sin el otro, es decir, “capital sin violencia es imposible” (Rozental, 2017:97). Por ello, Marx, ya refería que el uso de la violencia fue esencial desde el origen de la llamada acumulación originaria y hora, en pleno siglo XXI la violencia sigue siendo nodal en los procesos políticos y económicos de acumulación, “permanente y expansiva” (Rozental, 2017: 102). Desplegándose la violencia con mayor barbarie sobre los territorios de la semi-periferia y periferia del sistema mundo moderno-colonial y formando complejas redes de interseccionalidades de poderes y de violencias organizadas sobre los cuerpos y los territorios mapeados.

En un contexto global de totalidad violenta contra la humanidad y la naturaleza planteamos que uno de los dispositivos de poder con que cuenta históricamente el sistema capitalista para mantener el control, dominio, acumulación, crecimiento y reproducción del capital a nivel global es la estrategia de guerra, porque “el capital requiere de la violencia para poder lograr sus fines, y entre las muchas violencias que aplica y desata están las guerras” (Rozental, 2017: 97). Pero en la guerra tanto interna como externa no se trata de aniquilar a todos los sujetos, sino de hacer morir a unos y dejar a vivir otros, porque “sin vida, sin cuerpo viviente, no hay fuerza de trabajo” (Osorio, 2012: 88) y sin fuerza de trabajo no hay reproducción social del capital.

En el caso de México y sus regiones el despliegue de una guerra reciente en este marco de guerras capitalistas ha sido la denominada “guerra contra el narcotráfico” (2006-2018), la cual se ha nutrido de un complejo bélico, económico y político para transformar los territorios rurales y urbanos en geografías latentes de violencia armada y de economías criminales; mismas que se han articulado a las dinámicas expansivas del capital por la vía yuxtapuesta de la legalidad-ilegalidad del mercado capitalista; ya que la expansión del capital se desarrolla en alianza subterránea con las mafias y la criminalidad nacional- transnacional, es decir, la acumulación y reproducción del capital siempre “se muestra como legal, pero se origina [*también*] en actividades ilegales” (Estrada, 2007: 3). Por ello, es que la guerra contra el narcotráfico y las economías criminales no son simples anomalías del sistema capitalista, son dinámicas de



rentabilidad económica legal-ilegal que pueden anclarse en diversos campos de lo público y privado.

En estas nuevas guerras de la dictadura capital (que pueden ser entre estados o al interior de ellos), la violencia contra los dominados sigue operando como una constante, a tal grado de que podemos hablar de modalidades de guerra entre los pobres y “guerras contra los pobres” (Gledhill, 2015:13). Así, en la lógica expansiva del capital y sus guerras la vida de los a vencer, dominar y explotar no vale nada, salvo estadísticas de consumo o daños colaterales. Guerra y capital han sido las caras de una moneda acuñada en México bajo la forma de estrategia de guerra contra el narcotráfico.

Geografías del terror en el medio rural

En México, durante las últimas décadas la política de guerra ha permeado en los diversos territorios rurales y urbanos del Centro, Norte y Sur del país. La guerra contra el narcotráfico que ha provocado ríos de sangre y fosas del silencio ha sido la política planificada del Estado criminal sobre los territorios.

En este contexto de guerra contra el narcotráfico cárteles regionales en la zona centro de Guerrero como Los Rojos y Los Ardillos se han expresado como verdaderas máquinas de guerra, violencia, terror y muerte; desplegado sobre los territorios rurales y urbanos de la región múltiples violencias directas contra las comunidades y poblaciones: asesinando con tal impunidad familias enteras, incendiando casas, desplazando y despoblando comunidades completas, imponiendo una especie de leva narco-armada, violando y asesinando mujeres, convirtiendo así las comunidades en territorios arrasados y las regiones en *geografías del terror*.

En esta región las geografías rurales y urbanas del terror se han constituido como espacios donde impera la voluntad necrosoberana, los poderes facticos de la criminalidad y las sistemáticas violencias armadas sobre los territorios; en ellos se impone el desprecio por la vida de los otros a dominar, oprimir, explotar u aniquilar. Son territorios donde los efectos de la guerra se materializan sobre los cuerpos y los territorios por medio de torturas, secuestros, desplazamientos forzados, existencia de fosas clandestinas, toques de queda, *levantones*, emboscadas, asesinatos masivos y selectivos.

En la zona Centro Guerrero además las geografías del terror se muestran como: territorios en disputa por cárteles locales, regionales y nacionales, territorios apreciados en su valor de uso y de cambio como rutas de trasiego, tierras para la siembra,



producción y venta de enervantes, territorios con subjetividades condicionadas por el despliegue de la violencia ofensiva y defensiva, es decir, territorios como escenarios y campos de paraseguridad, necropoder y micro-paraestados.

Estos cambios sociales, políticos y territoriales impulsados como locomotoras por actores armados de la criminalidad organizada han reconfigurado no solo los territorios, sino las subjetividades de la población, la vida cotidiana, el sentido común, las actividades económicas, agrícolas y políticas, dejando a su paso lo que Oslender bien ha llamado como *paisajes de miedo*, sobre los cuales refiere:

La aplicación continua del terror en una región por parte de los actores armados produce paisajes de miedo. Estos paisajes frecuentemente son visibles en las huellas dejadas atrás, como por ejemplo casas destruidas y quemadas, huecos de balas o graffiti en las paredes, o plantaciones arrasadas o quemadas. Estos paisajes de miedo también son evidentes en los espacios vacíos (o vaciados) creados cuando los pobladores huyen, y abandonan sus casas y pueblos por temor de persecución y masacres [...] La presencia en el espacio de cuerpos humanos muertos, destruidos, o mutilados, es un recuerdo constante de la forma de actuar de los actores armados y violentos (Oslender, 2008).

En los paisaje de miedo de la zona Centro los cárteles regionales y sus grupos armados no solo se han dedicado al trasiego de enervantes; sobre los territorios, municipios y comunidades en disputa se han impuesto como el poder detrás del poder, generando escenarios de hegemonía criminal a punta de plomo o plata; sometiendo a las comunidades a una política de instrumentalización del terror y la violencia. Estas geografías el terror ha sido sembradas por alianzas en una zona gris de poder entre criminalidad y política, economía y narcotráfico, caciques y gobiernos, policías y pistoleros, dejando las comunidades y poblaciones a la intemperie de las amenazas, enfrentamientos armados y ejecuciones sistemáticas. En tales geografías rurales y urbanas la existencia de una zona gris de poder entre criminalidad organizada, sectores empresariales, gobierno y Estado resultan ser no la excepción sino la norma de una política de muerte.

Criminalidad organizada y sujetos cambiaformas

En México, el Estado de clase y de sectores de clase dominante se transformó durante el neoliberalismo para dar paso a “un Estado débil frente a las transnacionales y un Estado fuerte frente a los sectores populares” (Zibechi, 2015: 62), es decir, “el Estado se ha reconfigurado para adaptarse a las condiciones de la evolución del capitalismo” (Gibler, 2017:126). Así, en la nueva fase del capital, de la criminalidad organizada y de



reconfiguraciones estatales se han instituido con mayor facilidad Estados represivos, Estados encapsulados, Estados de excepción, economías criminales y políticas de muerte como la de guerra contra el narcotráfico desarrollada en México. Por otra parte, es en los Estados modernos donde refiere Achill Mbembe que: “la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quien debe morir” (Mbembe, 2006: 19), pero en estas nuevas configuraciones estatales y de fuerte criminalidad organizada este ejercicio soberano de hacer morir y dejar vivir se ha tornado una facultad de casi cualquier actor armado y hegemónico por lo difuso de las cadenas de poder que se han tejido y amarrado entre actores de la ilegalidad-legalidad estatal.

Por ello, en territorios de la región Centro los actores de la criminalidad han construido territorialidades superpuestas que a modo de micro-paraestados han establecido autoridades de facto. Así, en municipios y comunidad de esta zona los carteles regionales como Los Rojos y Los Ardillos han adquirido los rasgos de ser:

- A. Sujetos armados cambiaformas
- B. Sujetos que rompen con el monopolio de la violencia estatal
- C. Sujetos que ejercen el derecho soberano de eliminar al otro y a los otros por medios no pacíficos.
- D. Sujetos armados que responden a lógicas instrumentales de poder, criminalidad y dinero.

Aquí como en otras regiones el actuar difuso de la criminalidad es por medio de redes, alianzas y pactos que se construyen con personas o grupos de poder político, caciquil o empresarial en distintas esferas de lo público y privado, esto hace que en diferentes niveles de gobierno exista corrupción, impunidad y cierta tolerancia hacia los carteles regionales de parte de autoridades locales y corporaciones de seguridad estatal. Esta relación asociante entre elementos de Estado, gobierno, sector privado y criminalidad organizada hace que la irrupción y presencia de grupos armados vía el sicariato sobre los territorios en disputa se camufle según las tácticas, circunstancias u objetivos criminales. En este sentido, es que podemos pensar que los carteles y sus grupos armados actúan con rasgos de sujetos “maquinas de guerra”, sobre el cual Mbembe, refiere:



[...] Estas máquinas se componen de facciones de hombres armados que se escinden o se fusionan según su tarea y circunstancias. Organizaciones difusas y polimorfos, las máquinas de guerra se caracterizan por su capacidad para la metamorfosis. Su relación con el espacio es móvil. Algunas veces mantienen relaciones complejas con las formas estatales (que pueden ir de la autonomía a la incorporación) (Mbembe, 2011: 58 y 59).

Se trata pues de actores de la criminalidad organizada que por la instrumentalización de figuras pueden operar entre lo legal-ilegal estatal o en lo público-privado; ya sea como transportistas, funcionarios públicos, agentes del ministerio público, empresarios, políticos, policías municipales, estatales, federales, elementos castrenses o de seguridad privada, son siempre sujetos cambiaformas o *camaleónicos* que dependiendo el objetivo, la correlación de fuerza y las circunstancias se enmascaran o desenmascaran, así, “en las nuevas configuraciones de las maquinas de guerra, los actores estatales y no estatales se han fusionado” (Gibler, 2017:142), construyendo un engranaje sofisticado de poder y de aparatos de seguridad entre criminalidad organizada y elementos de Estado, porque “el crimen organizado por su poder económico penetra fácilmente en las estructuras castrenses [...]” (López y Rivas, 2012: 86-87).y asimismo, como refiere Jhon Gibler, en este ambiente de criminalidad y sujetos cambiaformas “un policía municipal actúa en un instante como policía y en otro como un agente de inteligencia militar o como un “narco” (Gibler, 2017:142).

Se trata de complejas relaciones de organizaciones y de hombres armados que se camuflajan, separan o fusionan en un entramado de diversos intereses legales-ilegales. Esta capacidad adaptativa y cambiaformas de sujetos armados con poder real y material ha sido posible en territorios de la región donde los actores del gobierno, el poder del Estado y sus instituciones son permisibles, aliados u omisos ante el uso de la violencia y donde “la afirmación de una autoridad suprema en un espacio político particular no es fácil” (Mbembe, 57). Por ende, en estos territorios “el ejercicio del derecho a matar ya no son monopolio único de los Estados [...]” (Mbembe, 56), sino atributo de casi cualquier organización armada y polimorfa de la región que oscila entre lo legal-ilegal estatal.

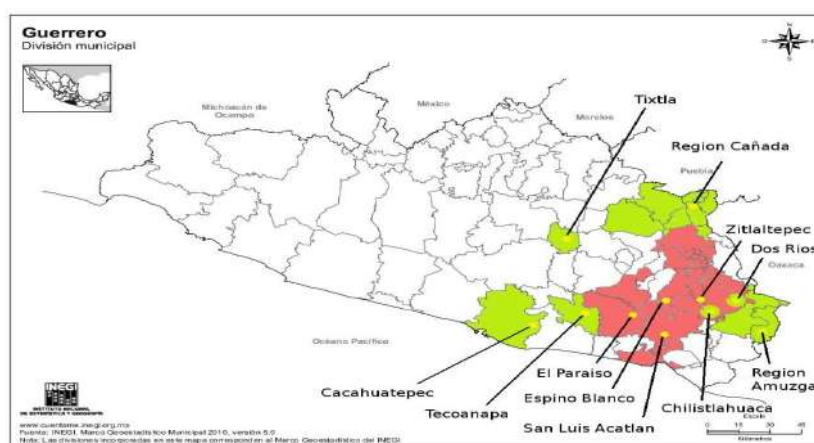
La formación de la defensa comunitaria en la región Centro: El municipio de Tixtla y la expansión de la CRAC-PC en 2013

Ante estas nuevas configuraciones del Estado, la violencia y los territorios es que la defensa comunitaria emerge sobre la región Centro en 2013. En ese año los grupos de autodefensa y la Policía Comunitaria de la Costa Chica-Montaña se convierten en



referentes organizativo y político para ciudadanos de otros municipios de Guerrero, entre ellos: Tixtla, Chilapa, Eduardo Neri, Tierra Colorada, José Joaquín de Herrera y Olinalá.

La conformación de estos nuevos grupos de defensa comunitaria ocurre en nuevo contexto de actores, violencia e inseguridad (con referente al origen de la Policía Comunitaria de la región Costa-Montaña en 1995). En el municipio de Tixtla La expansión de la seguridad comunitaria y del territorio comunitario de la CRAC-PC se construyó en un entramado de agravios y violencias provenientes del cartel regional Los Rojos. En 2013 este municipio se configuraba ante una nueva realidad de cercanos enfrentamientos armados, “levantones”, extorciones, secuestros, cobro de cuotas, torturas y ejecuciones.



Expansión de la Policía Comunitaria a partir de 2013 en Guerrero
Fuente: INEGI. Elaborado por Daniele Fini.

Fue el día 21 y 22 de enero del año 2013 que hombres y mujeres de las comunidades nahuas de Atliaca y de Acatempa irrumpieron con palos, paliacates, machetes, escopetas y rifles sobre sus comunidades colocando retenes en las entradas y salidas de las mismas. El empuñe de las armas tenía como objetivo afrontar localmente el problema de la criminalidad organizada. Así refiere el ex comisario de aquel entonces en la comunidad de Acatempa:

Entonces la gente de Atliaca se levanta en armas [...] llegó la fecha en que nosotros decidimos hacer un reten de igual forma. Nos organizamos, pusimos el retén y cerramos la carretera. Esto lo hicimos con todo el pueblo, éramos muchísimos, casi todo el pueblo, todo el pueblo estuvo ahí en la carretera, las señoras haciendo la comida, éramos muchísimos, porque ya la delincuencia nos estaba invadiendo” (ex comisario de Acatempa, entrevista personal, 30 de julio, 2018).



Con estas formas de acción colectiva ambas comunidades exigían seguridad para sus habitantes, ya que las autoridades de seguridad pública del municipio ante la nueva realidad de violencia se mostraban indiferentes o desbordadas, tan sólo entre los años de 2013 y 2014 la criminalidad organizada tenía ya presencia en “al menos 65 de los 81 municipios del estado” (Open Society Foundations, 2015: 13).

Días después los integrantes de la autodefensa de la comunidad de Atliaca dejaron las armas y quitaron los retenes que habían montado sobre la entrada y salida de su comunidad. Los habitantes de la comunidad de Acatempa, ante esta situación desarrollaron un planteamiento político organizativo de mayor envergadura, quienes al saberse en varias ocasiones, engañados por las autoridades del municipio optaron por constituirse en Policía Comunitaria y adherirse (CRAC-PC) de la Costa Chica-Montaña.

La iniciativa de la defensa comunitaria y la formación de la primera Policía Comunitaria en la comunidad Acatempa y en la región representaron una alternativa de acción y organización ciudadana para habitantes del municipio. Así, la defensa comunitaria empezó a cobrar fuerza en el municipio y entre los años 2013-2017 otras comunidades, colonias y barrios del municipio de Tixtla conformaron sus grupos de Policía Comunitaria, entre ellos; los barrios del Fortín, el Santuario, San Antonio; las colonias de Los Amates, Los Pinitos, El Zapote y Los Manguitos; las comunidades de Zacazonapa, Tecotzintla, La Estacada y Durazno.

En el periodo de mayor auge 2013-2015, la Policía Comunitaria de barrios y comunidades de Tixtla logró contar con más de ciento cincuenta integrantes que realizaban operativos de seguridad tanto en la parte rural como en la parte urbana del municipio. En Tixtla la Policía Comunitaria ha funcionado sobre todo como una fuerza de seguridad sobre los territorios más que como un sistema de impartición y procuración de justicia indígena. En la actualidad la Policía Comunitaria de este municipio se encuentra ante una crisis organizativa, con divisiones internas y con los desafíos de frente de la criminalidad organizada que sigue desarrollándose en la región.

Autodefensas y policías comunitarias en el municipio de Chilapa de Álvarez

En la parte rural del municipio de Chilapa la situación de la acción y organización colectiva de la defensa armada ha representado un movimiento confuso entre autodefensas y policías comunitarias.

Una de las primeras modalidades de defensa comunitaria que emergió en el municipio de Chilapa de Álvarez ocurrió entre los días 9 y 14 de mayo del año 2015; en aquella



fecha entraron más de trescientos ciudadanos armados y encapuchados, este destacamento de campesinos e indígenas era “encabezado por comisarios municipales [que] se [asumían] como guardia comunitaria de los poblados de El Jagüey, San Ángel, Ayahualulco y Ciloxuchicán” (Contreras, 2015: 10 de mayo). La toma de la cabecera municipal duró casi una semana y los actores rurales armados se presentaron bajo la modalidad organizativa de “Frente por La Paz y la Justicia”.

Otra modalidad de defensa comunitaria en este contexto de narco-territorios y de narco-violencias en Chilapa ocurrió en el poblado de Rincón de Chautla en septiembre del 2014. En esa fecha pobladores de ocho comunidades indígenas de la región conformaron estructuras organizativas de policías comunitarias, las comunidades eran por “Rincón de Chautla, colonia Emperador, Papaxtla, Zacapexco y Zompeltepec, por Chilapa; Ayahualtempa y Tlachimaltepec por José Joaquín de Herrera y la cabecera municipal de Zitlala” (De Dios Palma, 2014: 2 de septiembre). Este proceso organizativo y expansivo de la Policía Comunitaria en Chilapa se da en un periodo de divisiones y de crisis interna en la CRAC-PC de la Costa-Montaña, por lo que el grupo naciente se adscribe como parte de un bloque que dependerá de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores.

En este municipio a la par de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) se ha desarrollado otro proceso de defensa comunitaria que se reivindica como Policía Comunitaria, éste se conformó en la comunidad de San Jerónimo Palantla. Allí el día 16 de de julio del año 2016 un grupo de campesinos nahuas de esta comunidad se presentaron como parte un grupo de policía comunitaria que operaría en los territorios del poblado y que pertenecería a la Casa de Justicia de la CRAC-PC con sede en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec.

Una particularidad de estos nuevos procesos de defensa comunitaria que existen tanto en Rincón de Chautla como en San Jerónimo Palantla es que la disputa por el municipio entre los cárteles regionales de Los Rojos y Los Ardillos los ha colocado ente una sistemática violencia criminal de parte de ambos grupos de la criminalidad organizada. Así, la defensa comunitaria en el municipio de Chilapa representa un repertorio de nuevas formas de acción ciudadana y organización colectiva que buscan generar alternativas de seguridad comunitaria ante un entramados de violencias de parte de actores armados que buscan el control y la disputa de los territorios rurales y urbanos.



Eduardo Neri: Entre la violencia criminal y el despojo extractivo

El municipio de Eduardo Neri forman parte de la zona minera denominada “el cinturón de oro del río Balsas y que [...] explotan empresas canadienses como Leagol Mining y Teorrex Gold” (Contreras, 2019: 24 de abril). Esta situación ha hecho del municipio de Eduardo Neri un territorio atractivo económicamente para actores estatales, empresariales y de la criminalidad organizada. Sobre estos territorios bajo la guerra contra el narcotráfico operaban células de cárteles que mantenían una confrontación “por el control de las ganancias que genera la industria minera a cielo abierto, así como la producción y trasiego de heroína [...]” (Contreras, 2019: 24 de abril). Se trata de un territorio mapeado por y para la inversión del capital legal-ilegal, que se caracteriza por la existencia de empresas extractivistas y comunidades destrozadas por las violencias, territorios ricos en minerales como el oro y con poblaciones campesinas pobres, es la historia y forma de la violencia, el narco y el desarrollo neoliberal sobre esta zona minera de Mezcala y Carrizalillo.

Es en el año 2017 que la violencia de los grupos armados aumentó sobre esta zona minera y pretendió someter a las comunidades de Mezcala y Carrizalillo. Es así que habitantes de este municipio tuvieron que resistir a una triple articulación de violencias: la empresarial extractiva, la estatal y la de la criminalidad; en este caso las provenientes de los grupos Los Rojos, Los Guerrero Unidos y La Familia Michoacana que se disputaban la zona. Ante este panorama de agravios y violencias armadas:

Al menos diez poblados de la zona minera de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en Guerrero, conformaron su policía comunitaria y se alzaron en armas [...] los poblados que se alzaron en armas son: Amatitlan, Carrizalillo, Balsas del Sur, Mancillas, Plan de Liebres, Tenantla, San Miguel, Mezcala, Tepejuaje y Mazapa, todos del municipio de Eduardo Neri (API, 2017: 28 de mayo).

Los ciudadanos de los poblados de Eduardo Neri que se vieron involucrados en la acción y organización colectiva de la defensa del territorio ante una articulación de violencias legales-ilegales expresan la emergencia de la defensa comunitaria como una vía no legal pero sí legítima de pobladores y comunidades abandonadas a su suerte por los vacíos de seguridad estatal y ante el crecimiento de la criminalidad sobre los territorios incrustados en una región minera de fuerte interés para el capital que se desarrolla entre lo nacional-transnacional.

En estos proyectos de despojo territorial como es la minería a cielo abierto se han entrecruzado violencias estructurales, estatales y de la criminalidad organizada y se



muestra como los gobiernos neoliberales y los aparatos de seguridad estatal actúan en alianza contra los procesos de defensa comunitaria. En este sentido el día 26 de octubre del 2017:

Elementos de la Policía Estatal, detuvieron y desarmaron a más de 60 policías comunitarios de Eduardo Neri [...] en las inmediaciones de Zumpango, tras un fuerte operativo [...] más de 50 policías comunitarios del poblado de Mezcala fueron detenidos [...] a quienes les aseguraron armas largas de tipo escopeta y rifles de bajo calibre, así como cartuchos útiles de armas de alto poder (Molina de la Cruz, 2017: 26 de octubre).

Los procesos de defensa comunitaria desplegados en estos territorios mineros y desarticulados tempranamente por las violencias estatales y criminales muestra como los nuevos sistemas de defensa comunitaria en construcción permiten la colaboración y participación espontánea de campesinos, mestizos y ciudadanos armados en el ejercicio y construcción de una vigilancia comunitaria sobre los territorios mapeados por el extractivismo empresarial, el narco y el Estado.

Reflexiones finales

La guerra contra el narcotráfico desarrollada en México durante los dos últimos sexenios (2006-2018) ha mostrado como la violencia es una constante dentro de las dinámicas capitalistas. En Guerrero ésta se ha instrumentalizado por actores de la criminalidad organizada y en la formación de geografías del terror que configuran territorialidades superpuestas y sujetos cambiaformas que oscilan entre lo legal-ilegal y en una especie de zona gris de poder. Si bien la seguridad pública es responsabilidad de todo Estado moderno es ante un entramado de actores armados de la criminalidad organizada, violencias estructurales y violencia política que en la zona Centro de Guerrero sectores de la población de los municipios de Tixtla, Chilapa y Eduardo Neri por medio de formas de acción colectiva de defensa comunitaria han buscado construir la defensa del territorio, la seguridad y la vida.

Referencias bibliográficas

Estrada, Jairo, (2007). "Capitalismo criminal y organización mafiosa de la sociedad en Colombia", *Revista Cepa*, no. 3, Bogotá, p.3 [en línea] <http://localhost/espaciocritico.com/articulos/rev07/n7_a09.htm>

Fuentes y Fini, (2018). *Defender al pueblo, autodefensas y policías comunitarias en México*, Ciudad de México: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélaz Pliego", Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Edit. Del Lirio.



Gibler, Jhon, (2017). “Las economías del terror” Coord. Jorge Regalado, en *Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía*, México: Cátedra Interinstitucional Universidad de Guadalajara-CIESAS-Jorge Alonso.

Gledhill, John, (2015). *La cara oculta de la inseguridad en México*, México, Edit. Paidós.

López Barcenas, Francismo, (2014). “Policías comunitarios, grupos de autodefensa y paramilitares” en M.A. Marcos, R. Aréstegui Ruiz y A.Vázquez Villanueva (coords)., *La rebelión ciudadana y la justicia comunitaria en Guerrero*. México: Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Nerí, Congreso del Estado de Guerrero.

López y Rivas, Gilberto, (2012). *Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos: manuales, mentalidades y uso de la antropología*, Guatemala.

Mbembe, Achille, (2006). *Necropolítica*, España: Melusina.

Open Society Foundations. (2015). *Justicia fallida en el estado de Guerrero*, Nueva York, Nueva York 10019, EE.UU.

Ornelas, Raúl (2017) “La autodefensa como realización cultural: el caso de Michoacán” en Pleyers Geoffrey, Garza Zepeda Manuel (coords.), *México en Movimientos, resistencias y alternativas*. México: Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: Miguel Ángel Porrúa.

Oslender, Ulrich. (2008). Geografías del terror: un marco de análisis para el estudio del terror. *Scripta Nova* revista electrónica de geografía y ciencias sociales Universidad de Barcelona.

Osorio, Jaime. 2012. *Estado, Biopoder, exclusión, análisis desde la lógica del capital*, España: Anthropos, Universidad Metropolitana Unidad de Ciencias Sociales y Humanidades Unidad Xochimilco.

Raúl, Zibechi, (2015). *Latiendo Resistencia, Mundos Nuevos y Guerras de Despojo*, México: Cero. Era.

Rozental, Manuel, (2017). “¿Guerra? ¿Cuál guerra?” Coord. Jorge Regalado, en *Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía*, México: Cátedra Interinstitucional Universidad de Guadalajara-CIESAS-Jorge Alonso.

Fuentes periodísticas

API. (2017). Surge otra policía comunitaria en Guerrero. *Aristegui noticias*. Recuperado de <https://aristeguinoticias.com/2805/mexico/surge-otra-policia-comunitaria-en-guerrero/>



De Dios Palma, Arturo. (2014). Comunidades indígenas integran nuevas policías en la Montaña Guerrero. *Los Ángeles Press*. Recuperado de <https://losangelespress.org/comunidades-indigenas-integran-nuevas-policias-en-la-montana-guerrero/>

Flores Contrás, Ezequiel. (2015). Civiles armados mantienen sitiada Chilapa; van tras “El Chaparro”, líder de Los Rojos. *Revista Proceso*. Recuperado de <https://www.proceso.com.mx/403864/grupo-de-civiles-armados-mantienen-sitiada-chilapa>

Flores Contrás, Ezequiel. (2019). Mezcala, Guerrero: la maldición de una mina que no atrajo progreso, sino violencia. *Observatorio de conflictos mineros de América Latina*. Recuperado de < <https://bit.ly/3pMfaJm> >

Molina de la Cruz, José. (2017). Desarma y detiene policía estatal a más de 60 comunitarios de Mezcala en Zumpango. *Digital Guerrero*. Recuperado de <<https://bit.ly/2KVH9rC>>



Práticas e Discursos da ação coletiva:

Coletivos na cidade de São Paulo.

Marília Jahnel de Oliveira

Resumo

Este trabalho tem como objetivo investigar as motivações e justificativas de diferentes grupos de mobilização e de atuação política pela autodenominação “coletivo”, e refletir sobre o que essa escolha, seus discursos e práticas podem informar acerca desta forma de ação coletiva. Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com integrantes de cinco coletivos atuantes na cidade de São Paulo, Brasil.

Investigar o porquê de autodenominar-se “coletivo” permite analisar de que forma os integrantes dos coletivos definem os agrupamentos dos quais fazem parte, quais significados atribuem a essa forma de ação coletiva e como constroem diferentes modelos de organização e atuação política, contribuindo com as interpretações sobre o fenômeno dos coletivos enquanto formas contemporâneas de ação coletiva.

A busca pela construção de formas de organização mais horizontais, colaborativas e inclusivas, propiciando a diversidade de integrantes e permitindo a realização de ações plurais são aspectos marcantes da constituição desses grupos, sendo aos quais eles associam à escolha pela autodenominação “coletivo”. Também é possível entender essa construção como uma crítica às formas tradicionais de fazer política, vinculadas aos partidos e aos sindicatos.

Palavras chave

Ação coletiva; Movimentos sociais; Coletivos, Formas de organização; Práticas políticas.

Introdução

Na cidade de São Paulo, como em outras cidades do Brasil¹, há inúmeros grupos de mobilização e atuação política que se autodenominam “coletivos”. Entre eles é possível encontrar pluralidade temática, variados perfis dos integrantes, distintas práticas organizativas e de atuação, entre outros aspectos que os caracterizam, apontando para a diversidade deste campo e para a necessidade de reflexão sobre formas e possibilidades de atuação política coletiva da atualidade. O objetivo deste artigo² é investigar as motivações e justificativas de diferentes grupos pela autodenominação



“coletivo” e refletir sobre o que essa escolha pode informar acerca desta forma de ação coletiva.

A partir de um panorama sobre recentes pesquisas realizados no Brasil, é possível afirmar que há um considerável número de estudos que contemplam os coletivos e que há uma diversidade de áreas de investigação acadêmica que os consideram objeto de estudo. Eles têm ganhado relevância principalmente entre os estudos que analisam atuação política de jovens (Gohn, 2017; Peralva, 2017; Santos, 2017).

Com a ebulição de mobilizações, ativismos e militâncias ocorrida no Brasil nos últimos anos, os grupos autodenominados “coletivos” passaram a ter visibilidade no cenário das ações coletivas. Esses grupos são formados por pessoas que compartilham ideias e valores e que reconhecem o coletivo do qual fazem parte como seu espaço e meio de atuação política na sociedade para atingir um objetivo comum.

É possível apontar algumas características dos coletivos a partir dos estudos que os têm como objeto de pesquisa, tais como: preponderante participação de jovens; construção de formas colaborativas e não hierarquizadas de organização; centralidade das redes sociais digitais, da internet e dos celulares na atuação, divulgação e mobilização; além da dimensão territorial e cotidiana das ações para sua constituição enquanto espaço de atuação política, de participação, de reivindicação e de pertencimento (Bassani, 2016, 2016a; Gohn, 2017, 2018; Maia, 2013; Meirelles e Neto, 2018; Perez, 2017; Perez e Souza, 2017).

Fundamentação do problema

Ao considerarmos ações coletivas e movimentos sociais como fenômenos históricos decorrentes de lutas sociais que se transformam com as mudanças estruturais e conjunturais da sociedade, estes são objetos de estudo permanente. Estudos recentes sobre sociedade civil e ação coletiva contemporânea apontam aspectos como a internacionalização do ativismo, a renovação dos atores sociais e a emergência de práticas políticas que incorporam novas temáticas e formas de organização, bem como a ampliação das possibilidades da comunicação, demonstrando a diversidade dos movimentos sociais e ações coletivas. (Bringel; Gohn, 2012)

Esse cenário demanda atualização das interpretações sobre as ações coletivas contemporâneas considerando os aspectos apontados, bem como suas interações e os contextos sócio-políticos. O dinamismo das ações coletivas e dos movimentos sociais decorre e reflete, simultaneamente, na sua relação com o Estado e com a sociedade,



nas (re) definições de demandas coletivas, nas elaborações discursivas, na construção de identidades, nas formas de manifestação e mobilização, entre outros aspectos abordados pelas teorias e paradigmas deste campo de pesquisa.

Os aspectos apontados sobre as ações coletivas contemporâneas estão relacionados com manifestações mundiais que marcaram as mobilizações e atuações políticas nos últimos anos, desde os protestos que marcaram a resistência ao neoliberalismo nos anos 90. Neste cenário, o conjunto de mobilizações que reuniram milhares de pessoas pelas ruas de diversos países e tiveram forte ativismo nas redes sociais, conhecido como o ciclo de protestos de 2011-2013, marcaram uma onda de resistência e protestos sociais mundiais, incluindo a Primavera Árabe, no Oriente Médio e no Norte da África, os Indignados, na Espanha e o Movimento Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, dentre outros (Carneiro, 2012; Santos, 2013).

No Brasil, o mês de junho de 2013 foi marcado por grandes manifestações, que ocorreram em diversas cidades do país, também conhecidas por “Jornadas de Junho”. Em São Paulo, as mobilizações iniciaram com um ato do Movimento Passe Livre (MPL)³, após o aumento da passagem do transporte público e, rapidamente, mobilizaram milhares de pessoas e diversas pautas e demandas⁴.

Em busca de problematizar as mobilizações de Junho de 2013 a partir de elementos do ciclo de protestos de 2011, Breno Bringel (2013) faz uma análise em perspectiva global e situa os protestos ocorridos no Brasil no contexto mais amplo de “indignação global”:

[...] o caso brasileiro não pode ser entendido sem levar em consideração o ciclo de protestos que surgiu no mundo nos últimos anos. Embora possa ser discutido se estamos diante de um “ciclo global” de contestações (tal como o vivido com o movimento antiglobalização a partir dos anos 1990) ou simplesmente de uma “coleção” de mobilizações nacionais conectadas regionalmente e globalmente de maneira mais frouxa (e às vezes, inclusive “imaginária”), o fato é que há várias discussões e elementos transversais que conectam as mobilizações emergentes no Brasil com experiências tão distintas como as ocorridas na Grécia, nos Estados Unidos, na Islândia, na Espanha, na Turquia ou em alguns países do norte da África. (Bringel, 2013, p.3)

Entre os repertórios e práticas encontrados no ciclo de protestos de 2011-2013, destacam-se: a retomada da ocupação de espaços públicos das cidades como estratégia de disputa política; a centralidade da internet e dos celulares nas formas de mobilização; o questionamento da democracia representativa e de suas instituições; e



o discurso de horizontalidade e de práticas colaborativas no desenvolvimento das tarefas (Castells, 2013; Gohn, 2014b; Harvey, 2012; Pinto, 2012).

A ocupação de espaços públicos das cidades, como estratégia de disputa política, foi central nas mobilizações do ciclo de protestos de 2011 e aconteciam em espaços simbólicos das cidades.

Ela mostra como o poder coletivo de corpos no espaço público continua sendo o instrumento mais efetivo de oposição quando o acesso a todos os outros meios está bloqueado. A praça Tahir mostrou ao mundo uma verdade óbvia: são os corpos nas ruas e praças, não o balbucio de sentimentos no Twitter ou Facebook, que realmente importam. (Harvey 2012, p. 60-61)

O ciberespaço conjugou-se com o espaço público e a influência da internet e das redes sociais de comunicação para mobilização, divulgação, e até mesmo para tentar constranger repressões violentas durante as manifestações, é fator decisivo na caracterização do ciclo de protestos de 2011-2013. Em sua análise sobre os movimentos sociais na era da internet, Castells (2013, p. 45) afirma que um “espaço público híbrido, constituído por redes sociais digitais e por uma recém-criada comunidade urbana, estava no cerne do movimento [...]”.

Essas características, que atravessam as experiências brevemente apresentadas, indicam caminhos para reflexão sobre o cenário contemporâneo das ações coletivas e movimentos sociais a despeito das particularidades dos contextos de cada país e dos desdobramentos e consequências de cada processo. As práticas, discursos e repertórios presentes nas manifestações e movimentos elencados podem ser encontrados na construção das práticas organizativas e de atuação, bem como nos projetos políticos dos coletivos.

Questões metodológicas

As reflexões deste trabalho foram realizadas a partir do conteúdo fruto das entrevistas⁵ semiestruturadas realizadas com integrantes de cinco coletivos atuantes na cidade de São Paulo. Inicialmente, durante o desenvolvimento da pesquisa de mestrado da autora, havia sido aplicado um questionário, via internet, com 20 coletivos. A partir deste material, somado a uma breve análise da recente produção acadêmica que aborda os coletivos, foi possível elaborar um mapeamento prévio sobre questões relativas às práticas organizativas e de atuação destes grupos, bem como das demandas e projetos políticos. As entrevistas presenciais buscaram aprofundar os temas já apresentados no questionário e também incluíram novas formulações.



A noção de prática utilizada neste artigo faz referência ao conceito de repertório, que foi desenvolvido por Charles Tilly para comparar ações coletivas em diferentes períodos históricos. O repertório é um conjunto de formas de articular demandas e reivindicações que são contingentes e, por isso, renovado durante os processos históricos (Alonso, 2012).

A palavra repertório identifica um conjunto limitado de rotinas que são aprendidas, compartilhadas e postas em ação por meio de um processo relativamente deliberado de escolha. Repertórios são criações culturais aprendidas, mas eles não descendem de filosofia abstrata ou tomam forma como resultado da propaganda política; eles emergem da luta. [...] Em qualquer ponto particular da história, contudo, elas [as pessoas] aprendem apenas um pequeno número de maneiras alternativas de agir coletivamente (Tilly, 1995, p.26 apud Alonso, 2012, p.26).

Os repertórios podem informar como os grupos apresentam-se publicamente enquanto um ator coletivo, por isso, analisar um conjunto de práticas das ações coletivas possibilita conhecer e caracterizar as formas de organização e de ação que se consolidam em determinado período. Dito isto, este artigo considera como práticas os seguintes aspectos: as formas de organização interna, as ações desenvolvidas coletivamente, a constituição de redes e parcerias e as formas de financiamento.

A partir da revisão bibliográfica, e com o propósito de capturar a multiplicidade dos coletivos que atuam na cidade, buscou-se contemplar a pluralidade temática na seleção dos grupos entrevistados. Para isso, visamos abranger coletivos cujos projetos políticos dialogam com os temas relevantes no debate público dos últimos anos, considerando os que estão localizados no campo democrático e da busca pela justiça social.

Sendo assim, foram selecionados cinco coletivos: 1) universitário que aborda a questão racial, pautando o debate identitário face à implementação de cotas raciais e/ou outros mecanismos que ampliaram a entrada de negros e negras no ensino superior; 2) feminista, em reconhecimento a “Primavera das mulheres ou feminista”⁶ e seus desdobramentos; 3) de cultura digital em referência ao papel atribuído às redes sociais nos protestos recentes; 4) de direito à cidade, tema transversal das manifestações de Junho de 2013 por englobar o acesso e a qualidade dos serviços públicos e os processos participativos na gestão das cidades e no orçamento público; e 5) de intervenção urbana, tendo em vista que já na década de 1990 grupos que debatiam a arte pública e os processos colaborativos de autoria autodenominaram-se “coletivos” e



é possível relacioná-los com a formação dos coletivos contemporâneos (Bassani, 2016, 2016a).

Diante disso, em março e abril de 2019, foram realizadas conversas com integrantes dos seguintes coletivos: Coletivo 20 de novembro, que aborda a questão racial dentro da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e atua desde 2017; Coletivo Sycorax, grupo feminista que produz traduções de obras de autoras estrangeiras feministas marxistas a fim de contribuir com a luta das mulheres, desde 2015; Coletivo Digital, que se dedica à promoção da democracia nas redes e fomento à cultura, desde 2005; Organismo Parque Augusta (OPA), mobilizado em torno da manutenção de parque público em terreno localizado na região central da cidade desde 2013 e Coletivo Casadalapa, que realiza diversas intervenções urbanas pela cidade desde 2005.

O contato com os coletivos possibilitou acessar elementos importantes para esta pesquisa, no entanto, temos ciência de que o material coletado não permite generalizações sobre os coletivos e tampouco sobre a área de atuação dos grupos entrevistados. Mesmo assim, eles não deixam de serem atores coletivos representativos através dos quais podemos elencar aspectos da constituição de grupos que se autodenominam “coletivo” e refletir acerca das formas de mobilização e atuação política contemporâneas.

É importante considerar as designações utilizadas pelos próprios grupos organizados, pois elas remetem à identidade da ação coletiva. A pesquisa deve reconhecer as formulações construídas a partir das experiências dos próprios investigados e atentar para as representações elaboradas e apresentadas por eles. Portanto, é significativo examinar o que os integrantes dos coletivos pensam sobre a construção e atuação nesses espaços, bem como sobre a dinâmica de atuação e organização.

Pesquisar os coletivos contemporâneos contribui para aprofundar o conhecimento sobre os modos de fazer desses grupos e como seus integrantes elaboram, compreendem e ressignificam esses espaços de atuação política. Dessa forma, investigar as motivações e justificativas pela escolha da autodenominação “coletivo” permite analisar de que forma os integrantes definem os agrupamentos dos quais fazem parte, quais significados atribuem a essa forma de ação coletiva e como constroem diferentes modelos de organização e representação coletiva.

As designações utilizadas pelos grupos organizados remetem à identidade da ação coletiva. É preciso diferenciar as denominações atribuídas pelos pesquisadores



daquelas definidas pelos próprios grupos e seus integrantes. Assim, os sujeitos e grupos investigados são considerados produtores de saberes, além de serem objetos de estudo. A investigação deve reconhecer as formulações construídas a partir das experiências dos próprios investigados e atender para as representações elaboradas e apresentadas por eles. (Ilse Schrer – Warren, 2010).

Sobre os Coletivos

O coletivo 20 de novembro atua dentro da Faculdade Getúlio Vargas (FGV), uma instituição de ensino da elite de São Paulo, desde 2017. Atualmente, é composto por 60 pessoas, sendo 25 mulheres, a grande maioria estudantes do curso de graduação de Administração Pública. O grupo se define como “um coletivo negro da FGV-SP, que se propõe a construir um ambiente mais acolhedor aos negros e negras da instituição”.

Desde 2015, a FGV aceita o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)⁷ como avaliação para entrada na instituição, e esse é um dos fatores apontado pelo coletivo para o aumento da presença de negros e negras. Entretanto, a percepção dos integrantes é que apenas em 2017 entraram mais estudantes negros com “pensamento mais engajado”, e eles atribuem isso aos alunos oriundos do cursinho pré-vestibular da própria FGV⁸ e a um caso de racismo que ocorreu na instituição, fator que motivou um olhar e posicionamento mais engajado por parte dos alunos. “Os casos de opressão exigem resposta imediata. Em 2017, o caso de racismo com um integrante acelerou a necessidade de o grupo apresentar um posicionamento.” (20 De Novembro, 2019)⁹

O Coletivo Sycorax começou suas atividades em 2015 com a tradução do livro “Calibã e a Bruxa”, da autora italiana Silvia Federici. Composto apenas por mulheres, algumas delas faziam parte da revista Geni onde o livro seria publicado em fascículos, mas a Geni encerrou suas atividades. Composto por seis mulheres cuja faixa etária é de 30-37 anos, o Sycorax não tem sede própria, desenvolve tradução de obras de autoras feministas marxistas, realiza oficinas sobre trabalho reprodutivo e, atualmente, estão debatendo o processo de tradução e produção coletiva para fomentar outros coletivos feministas. A área de atuação do coletivo é definida como: “feminismo e com uma pegada dentro do marxismo”, mas na comunicação pública definem-se como anticapitalistas para apontar a visão de feminismo do grupo.

O Organismo Parque Augusta (OPA) foi formado em 2013 por pessoas que se encontravam na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, na dispersão dos protestos pelo passe livre, em junho de 2013. Esse grupo começou a pensar formas de ativação



do centro da cidade, incluindo o terreno do parque, que nessa época era aberto para população.

Quando foi autorizada a construção de prédios residenciais na área, o terreno foi ocupado e diversas atividades culturais foram realizadas durante 47 dias. A ocupação foi a primeira articulação entre os diversos grupos que lutavam pelo Parque Augusta, constituindo o Movimento Parque Augusta¹⁰. Após a reintegração de posse do terreno, e o fim da ocupação, as construtoras Setin e Cyrela, que eram as proprietárias do terreno, ergueram tapumes ao redor da área do parque. Frente a isso, outras práticas começaram a ser acionadas pelo OPA como forma de disputa e o coletivo começa a enveredar para área jurídica. Entre muitas idas e vindas de decisões judiciais, em 2019, aconteceu a assinatura pública da escritura do terreno, o que na prática significa a garantia de que o terreno será parque e não haverá construção de prédios na área.

O Coletivo Digital, fundado no início de 2005, é oriundo de um grupo de funcionários públicos que compunha a equipe da Coordenadoria Geral de Governo Eletrônico, responsável pela implementação dos Telecentros¹¹ na gestão municipal de São Paulo de 2001 – 2005, durante o governo de Marta Suplicy, do Partido dos Trabalhadores (PT). Durante a gestão, o grupo acumulou um importante conhecimento em inclusão digital e *software livre* voltado para o uso público. Para não perder esse acúmulo, que era um tema incipiente no Brasil, e continuar fomentando a inclusão digital e promovendo o uso de *software livre*, o grupo de servidores decidiu seguir reunido e constituir-se como pessoa jurídica, ou seja, obter um CNPJ¹².

[...] (essa escolha) foi consciente. Para ter possibilidade de concorrer a editais, convênios com prefeituras e fazer parcerias com organizações ainda não instituídas que tinham dificuldade de ter e de manter o CNPJ, porque é muito difícil para entidades do movimento popular se manterem e cumprirem as exigências para parcerias com órgãos governamentais. Existir há 14 anos com atividades e legalmente constituída, é uma vitória. (Coletivo Digital, 2019)

Atualmente, o coletivo é formado por 15 pessoas com a extensa faixa etária de 20 a 60 anos. Conforme os projetos em que as pessoas atuam, elas são remuneradas pelo coletivo. O coletivo tem uma sede, um espaço localizado no bairro da Vila Madalena, região oeste da cidade, que funciona como um centro cultural aberto ao público e que congrega outros tantos coletivos.

O coletivo casadalapa começou com uma turma de amigos que fazia coisas juntos. Em determinado momento, todos estavam com a mesma necessidade: ter um espaço para



trabalhar. Esse foi o grande motivo de alugar uma casa com salas a serem compartilhadas. Em 2005, onze pessoas alugam a casa, no bairro da Lapa, para compartilhar espaços e projetos, e, entre saídas e chegadas, hoje o coletivo é composto por 17 pessoas que estão entre os 40 e 50 anos de idade.

Em meio à rotina de trabalho de cada pessoa, eles começaram a fazer encontros criativos com todos que ocupavam a casa. Em 2006, começaram a fazer a intervenção “Onde está o Craque”¹³, no bairro da Luz, que foi a primeira intervenção de arte pública realizada pelo coletivo. Durante a conversa foi registrada a afirmação “a gente é um coletivo de arte”, mas diante da questão sobre a área de atuação do coletivo, a seguinte reflexão é colocada:

Na rua, é a coisa da relação com a cidade, (a ideia de) desproibir a cidade. Pra mostrar que a cidade é viva. Olhar e intervir na cidade e viver em comunidade, e quanto maior a comunidade, melhor, não é a ideia de um grupinho sustentável (risos). As pessoas que fazem parte do coletivo já tinham esse interesse de intervir na cidade. (Casadalapa, 2019)

O coletivo casadalapa realiza diversas atividades como, intervenções urbanas, exibição e produção de filmes, festas, entre outras e prima pela realização de parcerias, que eles chamam de aliados. Entretanto, afirmaram estar “tudo meio parado”, desde o final de 2018¹⁴. “Devido ao momento político, estamos fazendo manutenção dos amigos, passando tempo dentro da casa, fazendo uma comida para estarmos juntos e juntos com os aliados” (Casadalapa, 2019).

As entrevistas com os coletivos permitem relacionar as práticas com a identidade dos mesmos enquanto grupos de ação coletiva que buscam a construção de outras possibilidades de atuação e participação política. Podemos verificar esse objetivo na reflexão seguinte.

Aqui (na casa) tudo se faz com software livre e a existência do coletivo como uma casa de cultura é mostrar que isso é possível. Que podemos trabalhar compartilhando, fazendo junto e com muita gente. [...] A nossa utopia é que o compartilhamento consiga tecer vários pontos de identidades e permitam as pessoas viverem sem preconceito, entendendo a diversidade, trabalhando e aprendendo com essa diversidade e construindo um mundo melhor de se viver. (Coletivo Digital, 2019)

Da mesma forma, atuação do coletivo 20 de novembro, ao incluir a pauta da diversidade no cotidiano das reflexões acadêmicas, tensionando a abordagem desse tema nos



conteúdos de ensino e pesquisa, e ao acolher os negros e negras, diante do perfil majoritariamente branco dos alunos e professores da instituição, faz a disputa política na universidade, priorizando a dimensão cotidiana e contrapondo-se às práticas da política institucionalizada.

Na apresentação dos coletivos destacam-se as propostas de horizontalidade nas práticas organizativas e os processos colaborativos do fazer entre os integrantes e os aliados. Esses são aspectos marcantes da constituição desses grupos, sendo aos quais eles associam a denominação “coletivo”. Também é possível entender essa construção como uma crítica às formas tradicionais de fazer política, vinculadas aos partidos e aos sindicatos.

Para o Sycorax, a autodenominação “coletivo” representa o modo de trabalho entre as integrantes e permite registrar que não é um fazer individualizado. “É no sentido de coletividade e no sentido político do que a gente faz” (SYCORAX, 2019) que elas escolheram autodenominar-se “coletivo”. A organização colaborativa permite exercitar formas que sejam opostas à lógica individualista e competitiva do capitalismo e está diretamente relacionada com a autodefinição do grupo, enquanto “feminista anticapitalista”.

Nessa mesma linha, o Coletivo Digital fez a escolha pela autodenominação “coletivo” para preservar a forma de trabalho desenvolvida na prefeitura, que sempre foi realizado de forma compartilhada e colaborativa. Mas reconhece que a denominação não é garantia de permanência dos princípios e que há um alerta permanente, para não se impregnar com o autoritarismo e a exclusão que vem da sociedade. “Nascemos de uma produção coletiva e queremos continuar sendo isso e fomentando isso” (Coletivo Digital, 2019).

No entendimento do coletivo casadalapa o significado da autodenominação “coletivo” está relacionado com as práticas cotidianas da casa que devem estar baseadas na construção de um novo modelo de sociedade que seja justa. Essa compreensão está diretamente relacionada ao atual objetivo do coletivo, que é:

se manter junto diante da crise que estamos passando.. Maior objetivo é não desistir de ser coletivo, porque é fácil desistir, nesse momento de crise e introspecção. [...] viver em coletivo como forma de resistência ... e é contágio. Pode dar incentivo para outras pessoas. As ações do coletivo reverberam. Por isso, o objetivo maior é que a casa continue. Porque existir como coletivo já é uma cutucada política (Casadalapa, 2019)



Reflexões Finais

Considerando as características elencadas sobre o ciclo de protestos de 2011 – 2013, em relação à ocupação do espaço público podemos encontrar interface com a atuação da Casadalapa, que realiza intervenções artísticas nos espaços públicos, e com o Organismo Parque Augusta que, inicialmente, realizou suas ações no terreno em disputa. Tendo a cidade como suporte, as ações da Casadalapa geram reflexões sobre os usos da cidade, enquanto as ações do OPA promoveram a ativação e o uso público de um espaço da cidade, indicando aproximação com a estratégia de disputa política de ocupação do espaço público.

Assim como o ciberespaço conjugou-se com o espaço público no ciclo de protestos de 2011-2013, as mídias digitais têm centralidade na organização e na atuação dos coletivos. Ao possibilitarem um contato instantâneo e simultâneo entre os integrantes, através das redes sociais e das ferramentas digitais eles agendam encontros, produzem e encaminham questões em conjunto. Ainda, os conteúdos produzidos pelos coletivos são divulgados na internet e, com eles, os valores e ideais que lhes conferem identidade circulam pela rede. Logo, a análise dos coletivos reafirma que as mídias digitais configuram-se como espaços de disputa política, influenciam as práticas das ações coletivas e, por isso, devem ser incluídas nas reflexões deste campo.

Investigar o porquê de autodenominar-se “coletivo” permite analisar de que forma os integrantes dos coletivos definem os agrupamentos dos quais fazem parte, quais significados atribuem a essa forma de ação coletiva e como constroem diferentes modelos de organização e atuação política, contribuindo com as interpretações sobre o fenômeno dos coletivos enquanto formas contemporâneas de ação coletiva.

A busca pela construção de formas de organização mais horizontais, colaborativas e inclusivas, propiciando a diversidade de integrantes e permitindo a realização de ações plurais são aspectos marcantes da constituição desses grupos, sendo aos quais eles associam à escolha pela autodenominação “coletivo”. Também é possível entender essa construção como uma crítica às formas tradicionais de fazer política, vinculadas aos partidos e aos sindicatos. Parece importante investigar quais são as tensões e limitações que os coletivos encontram nesse processo.

Notas

¹ Durante participação na CLACSO, em 2018, ficou aparente que esse também é um fenômeno presente em outros países da América Latina.



² As reflexões deste artigo fazem parte da dissertação de mestrado que investiga as práticas e identidades de grupos que se autodenominam “coletivo”, a fim de analisar elementos comuns que os caracterizam, bem como investigar as tensões e os limites na construção desses grupos, realizada na UFABC.

³ Conforme o próprio movimento, “o Movimento Passe Livre (MPL) é um movimento social autônomo,

apartidário, horizontal e independente, que luta por um transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da população e fora da iniciativa privada”. Fonte: <https://www.mpl.org.br/>, acesso em maio de 2019.

⁴ Não se pretende aprofundar as reflexões sobre as “Jornadas de Junho”, e suas consequências, por entender que este não é o objetivo aqui proposto e também para evitar análises superficiais, tendo em vista sua complexidade e a disputa política que existe sobre o significado, interpretações e consequências de Junho de 2013.

⁵ Entrevistas realizadas no início de 2019 para realização da dissertação de mestrado realizada na UFABC - Brasil

⁶ Primavera das mulheres ou primavera feminista refere-se à mobilização que reuniu milhares de mulheres nas ruas para manifestar a insatisfação com as pautas conservadoras que estavam em discussão no Congresso Nacional e outras reivindicações da luta das mulheres, ocorridas em 2015 e associadas à um forte ativismo nas redes sociais, principalmente através das campanhas virtuais, como a #primeiroassedio, por exemplo (Dutra, 2018; Ribeiro, O’dwyer e Heilborn, 2018).

⁷ ENEM – Exame nacional do ensino médio, utilizado por algumas universidades do Brasil como acesso ao ensino superior

⁸ Alunos e ex-alunos da própria instituição são professores voluntários no cursinho pré-vestibular gratuito.

⁹ As citações retiradas das entrevistas realizadas serão referenciadas com o nome dos coletivos e não pelo nome do integrante que falou o que foi transcrito, tendo em vista que os integrantes com quem conversamos são aqui entendidos como representantes dos coletivos.

¹⁰ Aliança de diversos grupos que demandavam o parque no terreno em questão.

¹¹ Telecentros são espaços públicos equipados com microcomputadores, Internet e outras tecnologias digitais, voltados para inclusão digital.

¹² Embora o Coletivo Digital seja institucionalizado como Organização Não Governamental - ONG, suas práticas de organização e de atuação, seus objetivo e



projetos políticos estão mais próximos dos coletivos do que das formas de organização vinculadas ao terceiro setor.

¹³ Intervenção artística realizada no espaço público no bairro da Luz. O nome da intervenção é um jogo de palavras (craque e crack) para questionar a estigmatização do bairro e dos usuários da droga, numa região onde há uma cena de consumo a céu aberto, no centro de São Paulo.

¹⁴ Ano da vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, que tem implementado políticas que aumentam a desigualdade social, marcando um enorme retrocesso de direitos no país, além de ser publicamente a favor da tortura e apoiador da ditadura, racista e homofóbico.

Referência Bibliográfica

Alcantara, L. M. Ciberativismo e movimentos sociais: mapeando discussões. Aurora: revista de arte, mídia e política, São Paulo, v.8, n.23, jun-set, 2015, p.73-97

Alonso, A. Repertório segundo Charles Tilly: história de um conceito. Sociologia & Antropologia, Rio de Janeiro, v.02.03. jan-jun, 2012, p.21-41

Bassani, J. Coletivos na cidade de São Paulo, Itau Cultural, 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6eetuRKmPB4>. Acessado em: 18 dez 2018

_____. Série Coletivos Culturais, Itau Cultural, 2016^a Disponível: <http://www.itaucultural.org.br/jorge-bassani-serie-coletivos-culturais>. Acessado em: 18 dez 2018

Bringel, B. Sentidos e tendências do levante brasileiro de 2013. As Jornadas de Junho em perspectiva global, Rio de Janeiro, Dossiê temático, n.3, NETSAL, IESP/UERJ, dez, 2013, p.16-29. Disponível: <<https://bit.ly/35firJo>> Acessado em: 10 abril 2018

Carneiro, H. S. Rebeliões e Ocupações de 2011. In Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas, Harvey, D. et al, São Paulo, Carta Maior, Boitempo, 2012, p.7-14.

Castells, M. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da Internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

Dutra, Z. A Primavera das Mulheres: Ciberfeminismo e os movimentos feministas.

Revista Feminismos, v.6, n.2, maio-agosto, 2018, p.19-31.

Gohn, M. Teoria dos Movimentos Sociais: Paradigmas e clássicos contemporâneos. São Paulo: Loyola, 2014.

_____. Sociologia dos Movimentos Sociais. São Paulo: Cortez, 2014b.



_____ Manifestações e protestos no Brasil: correntes e contracorrentes na atualidade. São Paulo: Cortez. 2017.

_____ Jovens na política na atualidade – uma nova cultura de participação, Caderno CRH, Salvador, v.31 n.82, jan/abr. 2018, p.117-133

Gohn, M. e Bringel, B.(orgs). Movimentos Sociais na Era Global. Petrópolis/RJ. Editora Vozes, 2012

Harvey, D. Et al. Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas. São Paulo, Carta Maior, Boitempo, 2012.

Maia, G. A juventude e os coletivos: como se articulam as novas formas de expressão política. Revista eletrônica do curso de direito da UFSM v.8. n.1. Santa Maria, 2013 Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/8630>>. Acessado em 07 de janeiro de 2019.

Meirelles, M., Lima Neto, F. Percepções sobre participação na formação de coletivos, PUC, Rio de Janeiro, 2018 Disponível: <<https://bit.ly/3nd6utT>>. Acessado em janeiro de 2019.

Peralva, A. O legado de 2013: Coletivos de ativistas e a agenda política brasileira, 41º Encontro Anual da ANPOCS, GT 8, 2017.

Perez, O. Souza, B. Velhos, novos ou novíssimos movimentos sociais? As pautas e práticas dos coletivos. 41º Encontro Anual da ANPOCS, GT 11, 2017.

Perez, O. Surgimento e atuação dos coletivos que discutem clivagens sociais. II Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas. 30/05 a 02/06/2017, UFES, Vitória (ES), 2017. Disponível: <<https://bit.ly/3b9U7wv>>. Acessado em 30 dezembro de 2018.

Pinto, R. Movimentos Sociais 2011: estamos frente a uma nova forma de fazer política? In. Bringel, B., Gohn, M. (Orgs.) Movimentos sociais na era global. Petrópolis/RJ: Editora Vozes. 2012, p.129-145.

Ribeiro, L., O'dwyer, B. e Heilborn, M. Dilemas do feminismo e a possibilidade de radicalização da democracia em meio às diferenças: o caso da marcha das vadias no Rio de Janeiro, Civitas, Revista de Ciências Sociais, v.18, n.1, 2018, p.83-99

Rolnik, R. As vozes das ruas: as revoltas de junho e suas interpretações In. Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil, São Paulo, Carta Maior, Boitempo, 2013, p.7-12

Santos, C. M., Ciclo de protestos em 2011, da ordem e das desordens: do econômico ao multicultural, o ativismo e o confronto em alta. XVI Congresso Brasileiro de Sociologia, Salvador, 2013



Disponível: <<https://bit.ly/3ojBXfk>>. Acessado em maio de 2019.

Santos, F. Resistências ativas e resistências reativas: um estudo sobre os coletivos que contestam as práticas violentas da polícia no Estado de São Paulo. 2017, 149p. (Dissertação em Ciências Humanas e Sociais) – Programa de Ciências Humanas e Sociais

– Universidade Federal do ABC

Schrer – Warren, Ilse Movimentos sociais e pós colonialismo na América Latina. XIV Congresso Brasileiro de Sociologia. Rio de Janeiro, 2010



Acción colectiva por la paz: procesos organizativos y repertorios de acción

Alba Jakeline Ruano Jimenez¹

Resumen

La presente ponencia tiene como objetivo central el análisis y la reflexión sobre los procesos organizativos y los repertorios de acción que giran alrededor de la construcción de paz en Colombia y sus territorios. Existen innumerables manifestaciones de la sociedad civil en favor de la salida negociada al conflicto armado y el establecimiento de unas condiciones mínimas de vida que permitan tejer acciones en favor de la paz.

Este objetivo hace parte de un estudio de caso en uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia, el departamento de Nariño, donde desde los años noventa, se intensifica el conflicto armado y con sus consecuencias, se activan fuerzas sociales en defensa de la vida, los derechos humanos y el territorio, ejes centrales para la construcción de paz territorial.

Los resultados que se presentan en esta ponencia fueron posibles gracias a un trabajo de campo con organizaciones sociales de más de dos años, tiempo durante el cual la investigadora entra en contacto y trabajo conjunto con organizaciones sociales y activistas comprometidos con acciones en favor de la paz. Este trabajo es un ejercicio de investigación acción apoyada en la observación participante, las entrevistas semiestructurada y las historias de vida.

El interés por la urgencia de la construcción de paz es un espacio de encuentro de diferentes procesos organizativos, tradicionales y “nuevos”, con un amplio repertorio de acción y con la participación activa de mujeres, jóvenes y diversidad de grupos poblacionales.

Palabras clave

Acción colectiva; Organización social; Paz; Participación.

Introducción

Una de las características histórica del conflicto armado en Colombia ha sido el carácter regional. Si bien existen hechos históricos - estructurales nacionales desencadenantes del conflicto armado, como: la cuestión agraria, la debilidad institucional, la desigual distribución de la riqueza, el monopolio de las armas y de la violencia, cada una de las regiones ha experimentado y ha vivido este conflicto con dinámicas propias. En



consecuencia la construcción de paz implica también que debe ser pensada desde las particularidades regionales del conflicto armado. Pensar en lo regional nos remite a la reflexión sobre la construcción del llamado Estado Nación, Fernán Gonzales (2014) y el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y la Violencia (2015) destacan como una de las características del conflicto armado en Colombia, las marcadas diferencias regionales en relación con la forma de poblamiento, la ocupación de las tierras, la relación de la población local con autoridades nacionales y también en relación con proyectos estratégicos políticos y/o económicos de orden nacional e incluso internacional. Desde esta perspectiva se entiende que el conflicto armado y la construcción de paz hacen parte del proceso de construcción de Estado Nación como proceso que implica relaciones sociales, políticas, económicas y culturales complejas dentro de cada una de las regiones y de éstas con el orden nacional e internacional.

En este contexto se reconoce importantes experiencias de construcción de paz lideradas desde la sociedad civil de manera individual y organizada, propuestas que parten de la necesidad sentida por mitigar los efectos del conflicto armado y buscar soluciones negociadas al conflicto.

Desde los años 70 se registran en Colombia acciones de la sociedad civil en favor de la paz, un proceso que se identifica como “Movimiento por la Paz en Colombia” (Bejarano, 1999; Villarraga, 2003; García Duran, 2006). García Duran plantea que “entre 1978 y 2003, particularmente en la segunda mitad de los años noventa [el movimiento por la paz] fue un fenómeno social que se distinguió por cinco tendencias principales: una movilización de un nivel significativo, de carácter masivo, con un repertorio creciente de acciones, con cobertura nacional y poco conflictiva en su estilo de acción” (García Duran, 2006, p. 116). Según Datapaz (principal fuente de información consultada por García Duran), el nivel más alto de movilización se registra en el año 1997, con un poco más de 250 acciones colectivas por año. El trasfondo obligatorio de la movilización por la paz para esta época es la situación de violencia y guerra, sin embargo, esta situación deberá ser entendida en relación con otras situaciones de carácter estructural, como la desigualdad social, la corrupción administrativa, la llamada precariedad del Estado en las regiones, la vulneración de derechos por parte del Estado, entre otras situaciones.

A finales de los años 90, e inicios del siglo XXI, en el Departamento de Nariño, a la complejidad nacional del conflicto armado, se suman tres situaciones: 1. La expansión de los cultivos de uso ilícito, cultivos que tienen mayor impacto en las regiones de frontera, cordillera y Anden Pacífico; 2. La movilización de grupos armados insurgentes



y contrainsurgentes hacia zonas estratégicas para su accionar y para actividades de narcotráfico, y 3. La política de Seguridad Democrática entre los años 2002-2010. Ante este escenario, la población nariñense plantea como principales retos para la construcción de paz: la reconciliación y re-construcción del tejido social, el respeto por la vida, la protección de los derechos humanos, la garantía de unas condiciones de vida dignas en equidad e igualdad, el bienestar del territorio, la autonomía de las comunidades y la justicia social (Agenda de Paz, 2015).

Metodología

Se desarrolló un proceso de carácter cualitativo enfocado en la relación abierta e interactiva entre la teoría y la investigación, los conceptos y teorías son orientativos, abiertos y en construcción, se caracteriza por una interacción directa del investigador con los procesos sociales (Hernández, et, al, 2003). Este enfoque junto con las bondades de la Investigación Acción Participativa, permitió el reconocimiento e interpretación de los procesos organizativos y los repertorios de acción en favor de la paz en el Departamento de Nariño - Colombia.

Para abordar la complejidad del problema se plantea un modelo de análisis de nivel intermedio (Melucci, 2010), en contraposición a modelos macroestructurales e individuales. El objeto de análisis son los procesos organizativos y los repertorios de acción colectiva por la paz. Se parte de una base de datos construida por la alianza interinstitucional Andar el Sur, coordinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, en el año 2013, alimentada por la investigadora en el proceso de indagación.

Se plantea un análisis de carácter inductivo, es decir, se parte de casos específicos que permitirán conocer algunas particularidades de procesos organizativos y repertorios de acción por la paz.

Resultados y discusión

Acción colectiva por la paz y procesos organizativos

En el departamento de Nariño según información recogida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2003), entre los años 90 y la primera década del siglo XXI se cuenta con información de 60 experiencias de paz, de las cuales teniendo en cuenta la situación que motivo la acción, se determinó que 22 de estas experiencias se encuentran asociadas con el conflicto armado. Esta base de datos ha sido alimentada con información de campo y con otros procesos sociales como Agenda de Paz Nariño (2013-2015), que dan como resultado para el año 2016, 21 iniciativas colectivas



enfocadas en la paz y en relación con el conflicto armado. El mayor porcentaje de acciones se registra a partir del año 2002, y de manera concreta en el año 2009 se identifican el mayor número de experiencias.

En estas iniciativas confluyen diferentes procesos sociales, que han desarrollado trabajo articulado con organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica, Organizaciones de Cooperación Internacional, ONGs regionales y nacionales y también entidades de las administraciones locales y departamentales.

Entre los procesos sociales y políticos que han abanderado el tema de la paz y que sirven de antecedente en el estudio de iniciativas por la paz son:

- *La Sur-colombianidad y la Constituyente de Nariño por un Mandato Popular, procesos reconocidos por su enfoque en la construcción de paz: La surcolombianidad por su propuesta alternativa al Plan Colombia, y la Constituyente, como un proceso de formación política de los y las nariñenses y el enfoque participativo en la elaboración de propuestas políticas en los municipios y en el departamento (Calpa, 2014).*
- *El II Laboratorio de Paz desarrollada en el Macizo Colombiano. Es un programa de Cooperación Internacional desarrollado en el marco de un convenio entre el gobierno colombiano, la Comisión Europea y el Banco Mundial. Tiene como fin “propiciar la construcción colectiva de las condiciones para una paz duradera y la convivencia pacífica basada en una vida con dignidad oportunidades para todos los habitantes” (Banco de experiencias significativas para la paz y la convivencia, 2008). En la región esta propuesta es sostenida por una estructura bicéfala conformada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y en la Asociación del Municipios de la Región del Alto Patía (ASOPATIA). Este proceso se entiende como un “experimento en la construcción de paz” y de procesos de desarrollo alternativo desde las bases sociales.*

Este II Laboratorio de Paz se desarrolla en relación con tres ejes estratégicos:

1. *La implementación de una cultura de paz basada en el fortalecimiento de un diálogo de paz, del respeto por los derechos humanos y de una vida digna.*
 2. *Gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Y 3. Desarrollo socioeconómico sostenible (Barreto, 2009; Caballero, 2011).*
- *Movilización social en el municipio de Samaniego, proceso que ha pasado por diferentes etapas. En 1998 Samaniego Territorio de Paz, una experiencia reconocida con el Premio Nacional de Paz, se destaca por la iniciativa de movilización social en contra de amenazas, hostigamientos, extorsiones, asesinatos y otras formas de presión de las guerrillas contra*



funcionarios de las administraciones municipales y la población civil en general (Vicepresidencia de la República, 2001; Rettberg, 2006).

- *El Pacto local por la paz en Samaniego, nace como un instrumento de gobernabilidad y proyecto de vida para la población de este municipio. Es una propuesta que plantea un nuevo modelo de crecimiento, desarrollo y paz, que pretende llevar a su población a una sana convivencia como plataforma para un mejor vivir. Una de las acciones puntuales de esta iniciativa fue presentar una carta abierta de los pobladores del municipio y sus instituciones a los grupos armados presentes en la zona (ELN, AUC y FARC)², declarándose neutrales y autónomos frente al conflicto armado, con compromisos de buscar otras formas de resolver los conflictos sin la confrontación violenta; generar una cultura de tolerancia, la promoción de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, la participación, la democracia y la competitividad. Además solicitan que se declaren libres del conflicto algunos espacios de interés ciudadano como el hospital, los puestos de salud, las escuelas, la alcaldía y la vía Túquerres- Samaniego (Montufar, 2005). Esta experiencia es muestra del poder de decisión e incidencia del movimiento social en los contextos locales. Según Mouly, Garrido y Idler (2016) los elementos que para las autoras representa el éxito de la movilización social en Samaniego son: la participación, la unidad y la dirección colectiva.*

Ahora bien, producto de estas experiencias se identifican en los territorios iniciativas poco visibles y sectorizadas, que han estado enfocadas en atender a sectores particulares, con escasa o nula articulación entre ellas. Han liderado proyectos y programas para atender población vulnerable y con mayor grado de afectación por acciones del conflicto armado como: mujeres, niños, niñas, jóvenes, comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades campesinas, pero cada una con sus propias lógicas y repertorios de acción. Situación que evidencia el surgimiento de algunas tensiones entre sectores o con las comunidades no involucradas en estos procesos (Ver tabla anexa).

En el año 2012 el proceso de negociación entre el gobierno Santos y el grupo guerrillero FARC-EP y debido al escalonamiento del conflicto armado en esta región del país, la movilización social por la paz en el Departamento activó y motivó procesos organizativos para emprender acciones en favor de la paz, entre los que se destacan:

- **Minga³ por la Paz de Nariño⁴**, se configuró en el año 2012, con la participación de alrededor de 40 organizaciones sociales, campesinas e indígenas de Departamento de Nariño. Esta propuesta parte de tres iniciativas: 1. De carácter humanitario: donde existiera conflicto, promover una iniciativa en torno a un desminado humanitario. 2. Acción: impulsar iniciativas



de paz a nivel departamental y municipal, a partir de la experiencia Pacto Local de Paz (Samaniego); y 3. Acción: postulación de una salida política al conflicto social y armado a partir de diálogos regionales (Minga por la Paz de Nariño, 2015). Los líderes de este proceso se reconocen como pioneros de propuestas basadas en planes estratégicos por la paz a nivel nacional.

Actualmente (año 2019) este proceso recoge experiencias históricas de tejido territorial de paz desarrolladas por las comunidades, entre ellas: 1. Territorios Campesinos Agroalimentarios (implica reconocimiento de autoridad propia, guardia campesina, plan de vida, mandatos propios, las asambleas como mecanismos de participación y toma de decisiones, economía propia y encadenamiento productivo para el auto-sostenimiento y la venta hacia fuera. Espacios de encuentro espiritual con los campesinos y la naturaleza), 2. Plan de Vida de la Montaña – Samaniego, (Planificación del territorio desde sus cosmovisiones y en armonía con los otros, con el territorio y con la naturaleza) 3. Minga Inti Quilla AICO- Mallama, (inti- nombre quechua sol deidad de la mitología Inca, quilla- mama, luna, defensa del territorio como bien supremo) 4. Asociación del Pacto Local de Paz Chinchal, (desminado Humanitario) 5. Propuesta de Paz duradera de Santacruz, (desminado humanitario e inversión social en el territorio) 6. Espacio Educativo para la Paz y el Buen Vivir (Centro de formación y articulación de las iniciativas territoriales y de participación comunitaria).

- *Minga Nariñense por la Paz. Esta iniciativa se constituye en el año 2014, como propuesta de sectores sociales, que se autodenominan democráticos y de la izquierda nariñense para apoyar electoralmente el proceso de paz que ya venía en marcha entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de ese momento FARC-EP. “Es un escenario de confluencia entre movimientos, organizaciones y procesos sociales con partidos políticos alternativos y de izquierda, demócratas y progresistas e independientes. Somos un proceso político de región que trabaja por la paz con justicia social, la participación y estímulo a las movilizaciones sociales y la acción política unitaria para alcanzar el buen vivir en Nariño” (Minga Nariñense por la Paz, 2014)*

La iniciativa se fortalece en la segunda vuelta de elecciones presidenciales (2014 - 2018), cuando es alta la probabilidad de que en este proceso triunfe la derecha y no le dé continuidad al mencionado proceso de negociación, es así como la iniciativa se fortalece para apoyar la candidatura de la reelección del presidente Juan Manuel Santos.

- *Agenda de Paz Nariño⁵, se trata de un proceso participativo de construcción de lineamientos políticos que conlleven a la búsqueda de soluciones conjuntas para la*



transformación de los conflictos sociales y políticos que azotan al departamento y sus diferentes regiones y territorios. Esta iniciativa parte de reconocer que Nariño cuenta con grandes potenciales humanos, sociales, culturales, naturales que deben ser revalorados para la transformación conjunta de las situaciones de conflicto y violencia. En este sentido, se tiene como idea central que construir la paz en Nariño es una tarea conjunta, permanente e impostergable. Si bien el proceso lo lidera una alianza interinstitucional, es prioritario reconocer que este proceso se desarrolló con amplia participación de la sociedad civil de cada uno de los 64 municipios que integran el departamento.

- *Mujeres Nariñenses por la Paz. Un colectivo de mujeres que tiene origen en el año 2016, inicialmente se organizan con el objetivo de conocer a profundidad sobre el proceso de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo insurgente FARC – EP, en particular se interesan por el componente de género y la participación de la mujer tanto en el proceso de negociación como en la inclusión de este enfoque dentro del documento final del acuerdo.*

El colectivo se ha enfocado en tres temas específicos: 1. La defensa de la salida negociada al conflicto y los procesos de negociación entre el gobierno y los grupos insurgentes, 2. promoción y defensa de los derechos humanos en especial de las mujeres, los niños, las niñas y la población LGBTI, y 3. La promoción y protección del medio ambiente y la naturaleza.

Sobre repertorios de acción

Tilly define una acción colectiva (2010) como aquella llevada a cabo por un grupo de personas que comparten unos intereses comunes, que se organizan en unas estructuras más o menos formales y que ponen en marcha acciones movilizadoras, todo ello bajo una determinada estructura política que facilitará o dificultará su influencia en el poder en función de sus características. En el contexto del conflicto armado en Colombia la sociedad civil de manera organizada y de manera individual ha desarrollado diferentes acciones en favor de la paz. Entre los repertorios de acción se encuentran:

- *Acuerdos locales con los actores en conflicto, como el caso de Pacto local de Paz en el Municipio de Samaniego.*
- *Mingas, practica tradicional de pueblo originarios, que se define por el “encuentro de las familias, las comunidades y los pueblos y del trabajo cooperativo, se reproducen los valores que constituyen y definen lo común, lo solidario. En estos espacios se construye conocimiento desde el intercambio de saberes populares y ancestrales y se promueven la ayuda mutua como fundamento de la sociedad y la participación ciudadana” (PNUD, 2010, pág. 30).*



- *Ejercicios de pedagogía en instituciones educativas y con las comunidades. Estos espacios de pedagogía conllevan diferentes objetivos, entre los más recurrentes: fortalecimiento de procesos organizativos, la valoración del territorio como parte de su propia vida, la defensa de vida como bien supremo, la relación que se establece con la naturaleza y el medio ambiente, el fortalecimiento de los liderazgos, la formación de los nuevos líderes, el fortalecimiento de la asociatividad, emprendimiento y comercialización, la construcción de una visión de paz integral y el reconocimiento de diversas conflictividades, formación política, participación en la elección de autoridades locales, relaciones con las administraciones locales.*
- *El Teatro, un ejemplo claro Teatro por la Paz Tumaco pone en escena hechos de violencia que se manifiestan en el municipio. Pastoral Social reconoce que la iniciativa representa una oportunidad para el desahogo y la manifestación en contra de tanta violencia. Uno de los grandes aportes de esta experiencia ha sido la motivación a la gente a resistir pacíficamente y a no ser pasiva frente al conflicto armado.*
- *Talleres sobre memoria, con la participación activa de las personas víctimas del conflicto, se busca recordar y narrar el conflicto, para avanzar en el manejo del luto, la sanación y la reconciliación.*
- *Manifiestos, cartas abiertas a la opinión pública, denunciando la violación de derechos y exigiendo a las administraciones locales, regionales y nacionales la protección de la vida, la salida negociada al conflicto, la garantía para el ejercicio del liderazgo, entre otras demandas.*
- *Movilización y protesta en la calle,*

Reflexiones finales

Responder a la pregunta de ¿Qué es la paz en Colombia? Es una tarea difícil, no tiene respuesta clara. Implica una reflexión sobre la historia, el conflicto armado y la situación social, política y económica, a lo que se suma el componente cultural. Bien dice Boaventura de Sousa Santos “vivimos en tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles”.

Cada uno de estos procesos son parte de la dinámica propia de las comunidades y tiene un componente formativo manifestado en el mismo proceso organizativo, la valoración del territorio como parte de su propia vida, la defensa de vida como bien supremo, la relación que se establece con la naturaleza y el medio ambiente, el fortalecimiento de los liderazgos y la formación de los nuevos líderes, el fortalecimiento de la asociatividad



y el emprendimiento, la construcción de una visión de paz integral y el reconocimiento de diversas conflictividades.

La construcción de paz implica retos que es necesario poner sobre la mesa, entre estos:

- *Tener en cuenta lo que traslapen territoriales*
- *Se debe tener en cuenta las propuestas territoriales de construcción de paz articularlas, proyectarlas y trabajar en sus acumulados.*
- *Cualificación de las organizaciones frente a las reformas institucionales rurales y para el ejercicio del gobierno.*
- *Identificar las características propias de los territorios, las relaciones que se establecen, el contexto histórico,*
- *Identificar los comunes de las comunidades y la articulación de acciones*
- *La formación de ciudadanías activas y alternativas*
- *Relaciones económicas entre las territorialidades y emprendimiento de proyectos para la producción*

Notas

¹Universidad de Nariño Nariño – Colombia

² Ejército de Liberación Nacional; Autodefensas Unidas de Colombia; Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

³ Esta práctica tiene un alto valor y fuerza cultural dentro de la gran región de los Andes, busca articular acciones en favor del bien común, prioriza el diálogo y la cooperación. En la actualidad La Minga se practica no solamente al interior de la comunidad indígena, sino también de los diferentes grupos poblacionales con el fin de unir esfuerzos para la defensa de los derechos sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales.

⁴ Minga por la Paz de Nariño se identifica como una iniciativa de movilización social en favor de la paz, que convoca e integra a otras organizaciones sociales de base del departamento de Nariño. Esta iniciativa se configuró en el año 2012.

⁵ Instituciones que lideran el proceso: Gobernación de Nariño (2012- 2015), Diócesis de Pasto, Ipiales y Tumaco, Agencia de Desarrollo Local (ADEL), PNUD



Bibliografía

Gonzales, Fernán (2014) Poder y violencia en Colombia. Colección Territorio, poder y conflicto. Odecofi – Cinep

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015) Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Consultado en: <<https://bit.ly/3nhxOqX>>. Última consulta, febrero de 2015

Bejarano, Jesús Antonio (1999) El papel de la sociedad civil en el proceso de paz. En: Los Laberintos de la Guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz. Editor: Francisco Leal Buitrago. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de los Andes. TM Editores. Bogotá. pp. 271 – 335.

García Duran, Mauricio (2006) Movimiento por la Paz en Colombia (1978- 2003). CINEP. Ediciones Antropos Ltda. Bogotá

Villarraga, Álvaro (2013) El movimiento ciudadano y social por la paz en Colombia. En: En: Movimiento ciudadano y social por la paz. Biblioteca de la Paz. Serie el proceso de paz en Colombia 1980-2013. Tomo IX. Compilador: Álvaro Villarraga. Fundación Cultura Democrática. Organización Internacional para las Migraciones. Bogotá. pp. 75-148

Agenda de Paz Nariño (2014). Agenda de Paz de Nariño. “Construir la paz en Nariño es una tarea conjunta e impostergable”. Documento de Trabajo. Gobernación de Nariño, Diócesis de Pasto, Ipiales y Tumaco

Andar el Sur 2013. <http://andarelsur.blogspot.com/p/inicio.html>

Barreto Henríquez, Miguel (2009) El Laboratorio de Paz del Cauca y Nariño: ¿Una salida indígena para la paz en Colombia? En: Guerra y Violencias en Colombia. Herramientas e Interpretaciones. Jorge A. Restrepo y David Aponte, editores. Editorial, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Caballero, Herry (2011) El Laboratorio de Paz II en el Macizo Colombiano Alto Patía. Versión de un participante. En: Construir Paz. Aportes desde la Universidad Nacional de Colombia. Editora: Virginia Inés Soto Lesmes. Cátedra Manuel Ancízar 2009. Bogotá

Calpa, Luis Eduardo (2014) Historia y capitalización de aprendizajes de los movimientos sociales de Nariño 1970-2013. Agencia para el Desarrollo Local.

Garrido, B; Mouly, C; y Idler, A. (2016) How peace takes shape locally: The experience of Civil Resistance in Samaniego, Colombia. En: Peace & Change, Vol. 41, No. 2, April 2016 © 2016 Peace History Society and Wiley Periodicals, Inc. Pp. 129-166

Hernandez, Roberto y otros (2003). Metodología de la investigación. Tercera Edición. México: Mc Graw Hill.



Melucci, Alberto (2010). *Acción Colectiva, vida cotidiana y democracia*. Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos.

Minga por la Paz de Nariño (2015) Documento de relatoría de Asamblea General de Minga por la Paz de Nariño, febrero de 2015.

Montufar, Harold (2005) *Pacto Local de Paz*. Publicada el 10/11/2005 Consultado en: http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7621

Última consulta 03/2015

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2013) *Primer Encuentro de Experiencias de Construcción de Paz “para pensar, sentir y transformar Nariño”*. Archivo digital de PNUD. San Juan de Pasto.

Rettberg, Angelika (2006). *Buscar la paz en medio del conflicto, un propósito que no de tregua: un estudio de las iniciativas de paz en Colombia (Desde los años 90 hasta hoy)*. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política – CESO. Bogotá.

Tilly, Charles; Wood, Lesley J. (2010) *Los movimientos sociales, 1768 -2008. Desde sus orígenes a Facebook*. Libros de historia. Traducción castellana: Ferran Esteve, Editorial, Crítica Barcelona

Vicepresidencia de la República (2001) *Iniciativas comunitarias de paz en Colombia: Semillas que abren el camino de la paz*. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Fondo de Inversiones para la Paz de la Presidencia de la República.



El movimiento de los encuentros, subvierte la naturalización de las subjetividades

Maribel Vásquez Narváez
Leidy Johana Rodríguez
Jessic Caudillo

“Todo acto educativo es un acto político”

Paulo Freire

Resumen

La construcción de la subjetividad en la vida cotidiana, configura una manera de ver el mundo, es el sujeto hecho cuerpo que deja permear un ser que observa, vive, siente, piensa y experimenta y al mismo tiempo, la experiencia del mundo que se construye en colectividad. Las subjetividades son construidas y reconstruidas tanto por el ser individual como colectivo, también existe una transformación, surgiendo la interrogante sobre cuál es el cambio que se da, que es lo que atraviesa nuestras subjetividades, para finalmente cuestionar sobre lo que determina nuestro pensamiento. Esto constituye diversas maneras de ver y experimentar el mundo que impacta en el sujeto y su vida desde una mirada compleja que engloba sus múltiples dimensiones y la vida de los otros, que es, su reflejo o el imaginario social que los distingue.

Es así que tejiendo palabras a través del encuentro y la escrituración, se voltea la mirada hacia la colectividad, moviendo al mismo tiempo los sentidos, las emociones y las sensaciones para reconocer aquello que nos une como mujeres latinas, inmersas en un sistema capitalista que extiende sus tentáculos para borrar las relaciones humanas, como si el encuentro debilitará su poder de controlar las conciencias. Así el encuentro pensante y luego la escrituración subvierten la naturalización de la cotidianidad para revelar en el diálogo las maneras de hacer conocimientos.

Palabras clave

Subjetividad; Experiencias; Vida cotidiana; Encuentro; Movimientos

Introducción

Voltear la mirada hacia la colectividad, provoca movernos hacia otros sentidos, de manera que por medio de los encuentros entre mujeres de diferentes lugares de Latinoamérica como Argentina, México y Colombia, hacen diálogo para movilizar la palabra escriturada, así también para compartir lo que somos, lo que acontece en



nuestras vidas y apostar a la consolidación de un movimiento de encuentros escriturados guiados por la propuesta de Jaques Derrida (Derrida, 1986) y las reflexiones que se obtuvieron del curso de semiótica que imparte el Dr. Janitzio Alariste en la Universidad del Estado de México y que comparte al grupo una de las integrantes. Damos los primeros pasos optando por un modo de hacer pensamiento a través de la red y el tejido de signos, usando WhatsApp e emails. Escribimos, leemos y compartimos lo que escribimos desde nuestras emociones y sentidos; incluyendo aspectos del mundo que nos rodea; las subjetividades son construidas y reconstruidas tanto por el ser individual como colectivo; también existe una transformación, surgiendo la problemática sobre ¿qué se transforma?,

¿qué es lo que atraviesa nuestras subjetividades, nuestro pensamiento para ser cómo somos y pensar cómo pensamos? Esto constituye diversas maneras de ver y experimentar el mundo que impacta al sujeto y su vida desde una mirada compleja que engloba las múltiples interpretaciones que cada integrante de la red le da a los significados y significantes como por ejemplo: ser maestras y ser mujeres.

Fundamentación del problema

La construcción de la subjetividad transita en la vida cotidiana entre las presencias y las ausencias, entre las certezas e incertidumbres, riesgos y aciertos de las relaciones consigo mismo y con los otros. Es así que vamos configurando una manera de ver el mundo, a través del sujeto hecho cuerpo que deja permear en su ser lo que observa, vive, siente, piensa y experimenta.

A través de tejer palabras se da vida a los encuentros en donde el diálogo con otros hace voltear la mirada hacia la colectividad, moviéndonos hacia otros sentidos. Se reconoce las subjetividades por medio de la experiencia de vida que transita sobre las conversaciones cotidianas, una cultura compartida por medio del diálogo de saberes. Las que aquí participan lo hicieron a través del uso del WhatsApp, recurso tecnológico impersonal que hoy mantiene tan ocupados a los seres humanos para mantenerlos tan distantes de aquellos que lo rodean y tan sumergido al mundo ideal que se da en los encuentros virtuales. Este encuentro se hizo con la conciencia de compartir saberes que como docentes vamos construyendo en el cotidiano.

Promovemos los encuentros en redes para poner en duda aquello que han dicho sociólogos que es común a una clase social. En esta práctica sociopolitizada, afirmamos nuestras vidas, historias y experiencias que podría sospecharse son tan comunes por ser mujeres, maestras e investigadoras de cuerpos, la estructura de clase, lo



estructurante que nos marca, la lengua o el lenguaje; como si estos vestigios dieran cuenta a los arqueólogos, que se trata de un mismo bicho que prolifera en lugares de Latinoamérica. Fue en el encuentro que se reafirma la diversidad de mundos. Lo más prolífico fueron los lugares de enunciación que da la impresión de ganarle al tiempo y al espacio, al superar las barreras que nos imponían nuestras funciones. Finalmente nos damos cuenta que le ganamos a un sistema que nos entretiene pensando en la supervivencia o en satisfacer necesidades frívolas que el sistema inventa para las mayorías como usos y consumos en su vida cotidiana (Certeau, 1925-1986). Hacer pensamiento en el encuentro a través de la red, fue provocar el intercambio de realidades, al principio nos resistíamos al abandono de la dosis de embrutecimiento, por qué cómo resistirse a ideas de consumo, cómo revelarse al reconocimiento del otro, era mejor mantenerse quieto. Cada encuentro mueve a conquistar nuevos aprendizajes, aprender de un semejante, distinguir etiquetas que mantienen ancladas las existencias. Revelar miedos, detalles tan naturalizados a lo que se enfrenta una mujer en los centros de trabajo, exigió exponerse y eso es más que desnudarse en público, además porque esto ya no solo era diálogo, sino escritura, finalmente tres maestras hablando de prácticas pedagógicas venidas de un imaginario para controlar masas. El poder del encuentro permitió repensarnos, al grado de descalificarnos porque solo éramos un reflejo de lo mucho que se ha dicho que era ser maestro. Maestras que habíamos enseñado a otros a leer y escribir, y nosotras no dominaba la palabra, no teníamos conciencia del peso del discurso. Esto de darnos cuenta fue lo que inicio la revolución de nuestros pensamientos.

Metodología

Asumimos el encuentro como la actividad que acciona conciencias, la responsabilidad de hacer pensamiento en colectivo, sopesando las experiencias de cada una para rescatar las subjetividades que se tejen cuando éstas son controladas por un sistema capitalista que es lo más común entre las que participan en este encuentro, además de nuestro género. Así darnos cuenta de la falta de politicidad en la vida de los maestros para desdoblarse y desarrollarse como sujeto y sobre todo como mujer. Esta toma de conciencia era promover educación en red, hacer pensamiento a través de una aplicación tecnológica para ganarle jugadas al sistema y una nueva forma de educarnos apostar por: "... la educación es la vida misma, o sea, si podemos hacer de la vida un hecho educativo, ello implica recuperar su carácter integral como vida, superando la fragmentación en la que se asienta el dominio del capital. Por otro lado, si lo que educa es la vida misma, el hecho educativo no tiene otro modo de suceder que afirmar,



potenciar, expandir, o sea poner en movimiento, los saberes que ya existen en la vida cotidiana de los sectores populares...” (Zibechi, 2006, pág. 131). Juntas recuperamos el sentido y la voluntad de hacer conciencia para transitar en la vida. Las historias y experiencias desde lugares de enunciación diversos, con ritmos diferentes por las diferencias de edad, de actividades y de pensamiento, no fue barrera para el encuentro. La escrituración como táctica desde De Certeau ayudó a abandonar a la escritura en su posición de poder, dio significado y peso al entretendido de las cotidianidades para desnaturalizar las subjetividades. Con Derrida desde el tratamiento del logos, aquello que nos hacía comunes repensarlo desde el discurso que enunciábamos, ya que era el reflejo de un discurso romántico que expresa lo que es ser maestro. Hablar solo de aquello que se conoce como pone barreras que lejos de crear encuentros se establecen distancias. La deconstrucción ayudó a analizar las estructuras que nos distinguen (Derrida, 1986).

Método para la obtención de información

A continuación presentaremos cada uno de nuestros enfoques desde nuestras singularidades.

Jessica: mi participación comienza con el deseo de ligar mi experiencia tanto académica como profesional a la vida y los proyectos de cuatro mujeres que coincidimos en el camino del aprendizaje. Un aprendizaje basado en el diálogo que permite conocer otras miradas y otras prácticas, que no solo implica compartir experiencias sino el deseo de transformar la realidad compleja de cada uno de nuestros espacios.

En mi caso parte de un interés hacia los más pequeños del sistema educativo, me refiero a los niños, mismos que diferente a lo que muchos piensan no solo representan a las generaciones futuras, sino que también se debe reconocer su papel como agente de cambio en su presente inmediato. Pero es necesario un arduo trabajo por romper las historias únicas que envuelven a la infancia,

Ser profesora de educación física me ha llevado a reflexionar acerca de la importancia que tienen los vínculos y la relación con el otro; ese otro que no es ajeno a mí, que representa el encuentro conmigo misma al observar y al interactuar.

La realidad dinámica a la cual nos enfrentamos como profesores, no nos permite permanecer con prácticas estáticas, es necesario una reformulación constante sobre los paradigmas sobre los cuales sostenemos la intervención. Por lo tanto mi búsqueda comienza con el estudio de la educación mexicana, pero desde una perspectiva social



y en la interculturalidad encuentro una base para el estudio educativo, donde los signos, símbolos, representaciones, creencias, acciones e interacciones influyen en la educación y en la convivencia que día a día se lleva a cabo en las aulas.

Mi apuesta se decanta por mirar a la educación física más allá de una utilización pragmática utilitaria, para pasar a la construcción de la identidad basada en el derecho legítimo que tiene los niños a la participación. Así como la figura del profesor que se posiciona como un mediador de los aprendizajes a través de prácticas intencionadas, donde los alumnos y el profesor puedan tener un diálogo de saberes y por lo tanto un encuentro de la propia voz a través del movimiento.

Johanna: El poder del encuentro es una presencia que se encarna por medio de tu cuerpo, es exponerte frente a otros con lo que piensa, siente, haces y le apuesta, es tejer la palabra por medio de la conversación. Los conceptos que giran mis investigaciones van hacia la vida, presencia, existencia, relaciones, una manera de ver el mundo y enunciar- exponer

Observo el mundo con ojos de optimismo, alegría, perseverancia, ganas y fuerza de hacer, de pensar en soluciones distintas, para construir caminos de cambios con pequeñas revoluciones que se puedan hacerse en las situaciones cotidianas de la vida. Me mueve la palabra que evite que nos dejemos paralizar del miedo, crear encuentros que no acallen nuestras voces y que no permitan perdernos en el silencio. Y creo en la pronunciación de la palabra que te permite exponer lo que piensas, sientes y crees con libertad y respeto.

La oportunidad de compartir con otras personas de otros lugares del mundo, es muy interesante, identificar en una conversación las ganas y la fuerza de hacer cosas distintas, movilizar ideas, compartir experiencias, unir voluntades y esfuerzos para apostar a un cambio en las manera como hacemos las cosas, tener conversaciones entrelazadas desde la diversidad cultura

Maribel. Cuando fui invitada a este grupo de encuentros, pensaba que había poco en común con dos mujeres mucho más jóvenes que yo, creí que las ganas de reflexionar y hacernos pensar, era lo más común que las tres teníamos. Desnaturalizando mi subjetividad me di cuenta que hay mucho en común entre las tres, el espacio virtual nos hacía comunes, el tiempo presente, el aire, este mundo caótico que vivimos las tres y los impactos de un sistema capitalista que disgrega las conciencias para alienar las colectividades.



Hilvanamos nuestras existencias con pedacitos de vida que se van reflejando semejantes. Las tres somos maestras, las tres investigadoras y las tres revolucionarias. Ser maestra en México hoy en día no es lo mismo que hace 34 años, inicié a los 18 años de edad, y cuando tuve 28 años, había trabajado ya con niños de preescolar, primaria y secundaria, además de tener tres hijos y un marido.

Durante mi experiencia trataron de callar mi voz, escuche muchos “no”, pero el mismo número de veces lo seguí intentando, permitieron crear experiencias para seguir preparándome, experimentar estrategias y tácticas que rindieron frutos a la comunidad estudiantil, sobre todo, decidí formar en mis alumnos actitudes para enfrentarse a todos los no que les deparaba la vida y mantenerse unidos para participar en las próximas revoluciones.

La responsabilidad con los otros como dice Bajtin, se desarrolla en las maestras, nos hace luchar por los fines comunes, por ideales, pensamos que se debe trabajar por hacer comunidad. Los grupos que están bajo nuestra responsabilidad los hacemos trabajar en equipo, siempre unidos porque sabemos que tomar acuerdos en común, es el mejor aprendizaje social que debemos trabajar en las escuelas para que nuestros alumnos sean mejores ciudadanos.

Estas experiencias de la docencia son las que nos permiten esa comunicación, porque el campo educativo es una de nuestras referencias comunes. La construcción reflexiva social, las vías posibles de acceso se van encontrando, en el diálogo.

Conclusiones

El encuentro con el otro lleva a reflexionar sobre la propia práctica cotidiana, es decir tratar de develar cual es el papel que desempeñó en este mundo, pero más que verlo desde una individualidad, tendríamos que voltear la mirada hacia la colectividad, hacia el movimiento en conjunto.

Los encuentros son revoluciones cotidianas que dan espacio a la conversación de situaciones de aprendizaje de a nuestra propia vida, un aliado son el encuentro en los café, en la complicidad de los libros y la seducción de la palabra viva.

Reflexiones

No sabemos cuántas rutas sean las que descubramos juntas, y cuántas otras tendremos que trazar en nuestras geografías para seguir el tránsito, todo con un objetivo, que el encuentro en redes sea para pensar y reflexionar nuestras subjetividades. Todo aquello que nos atraviesa cuando se piensa y se pone frente a la otra para decir “yo soy”, “yo



he sido”, y “¿yo seré?” ese es el que construiremos desde que nos encontramos, porque eso sí, ya no somos las mismas.

Es una época en que las mujeres van ganando espacio en ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, pero es necesaria la palabra, el dialogo y el encuentro para que formemos redes, donde compartamos y confrontemos nuestras ideas desde diferentes latitudes. No se trata de revitalizar fascismos, sino llevar a cabo un encuentro de conciencias que hagan comunidad¹.

El encuentro invita a encararse con la realidad y formalizar una organización social que permite articular una relación con los otros, como dice De Certeau, “La relación respecto a una verdad, representan lo que jamás se adquiere sin, lo cual, sin embargo, es imposible vivir, una credibilidad” (Certeau, 1925-1986). La posibilidad de que la presencia es una verdad, queda en duda, o de que con esa presencia a través de la red podamos incidir, en la imposibilidad del encuentro y la coincidencia que nos lleven a experimentar cosas comunes en espacios y territorios dispersos, solo creemos, porque creer nos invita a la búsqueda y la posibilidad.

Somos mujeres que compartimos sueños y experiencias que dan vida, fuerza para transitar otros caminos, tomar decisiones para andar por rutas no exploradas, así que poner en movimiento la conversación es compartir y estar para ayudarnos, apoyarnos y permitirnos ser.

El encuentro es de conciencia a conciencia, de emoción a emoción, el cuerpo se queda dispuesto, abierto, expuesto a las rupturas para comprender la mirada del otro. En él, se experimenta una especie de desprendimiento, y entra a otra frecuencia de pensamiento, se sigue a las demás en sus propios ritmos y sus propias hechuras para construir ideas que enriquecen el diálogo. La construcción se da a partir de una ruptura, una ruptura del encuentro con el otro, lo que provoca que la voz sea resignificada por el encuentro.

Notas

¹ Comunidad entendida más allá del encuentro de personas que trabajan con fines comunes que los hace ponerse en el lugar del otro, intereses compartidos que los une en experiencias, en sentimientos y sensaciones, en espiritualidad, en vivencias, costumbres, hábitos, símbolos y códigos que han construido en colectividad.



Referencias bibliográficas

Certeau, M. d. (1925-1986). *La invención de lo cotidiano.1.Artes de hacer*. México: Universidad Iberoamericana. Departamento de Historia. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores.

Derrida, J. (1986). *De la gramatología*. Mexico, España, Colombia, Argentina: Siglo XXI.

Zibechi, R. (2006). *La emancipación como producción de vínculos.Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado*. Obtenido de < <https://bit.ly/35tZX8r>>



Primavera árabe en Egipto y Siria. Una aproximación sobre las identidades populares

Ignacio Robba Toribio¹

Resumen

La presente ponencia propone estudiar las revueltas árabes surgidas en Egipto y Siria desde 2011, dos países que comparten un pasado caracterizado por el nacionalismo o socialismo árabe. A partir de una relectura del corpus académico especializado en Medio Oriente, realizamos un abordaje crítico mediante el entramado conceptual de Ernesto Laclau (2007). Pretendemos aportar a la comprensión de la complejidad de la llamada “primavera árabe” a través de la hipótesis de que las revueltas manifestaron una diversidad de demandas sociales en oposición a un “otro” institucionalizado que no necesariamente confluyeron en la construcción de una nueva identidad popular. Para ello, consideramos pertinente reconstruir sus luchas históricas. Desde mediados del siglo XX, la constitución del nacionalismo como identidad popular implicaba la condición de ser árabe como eslabón hegemónico de la cadena equivalencial, en antagonismo con el bloque oligárquico- colonial. Sin embargo, en los últimos cuarenta años el islam político se constituyó como una cadena equivalencial alternativa disputando la hegemonía del nacionalismo. Relativizando la lectura dominante de la primavera árabe como democrática y antiautoritaria, comprendemos las revueltas como acciones colectivas en un contexto de crisis de sus identidades populares históricas. En este sentido, la primavera árabe fue protagonizada por una heterogeneidad de actores y demandas que desafiaron al status quo dominante, pero sin la capacidad de constituirse como identidad popular.

Palabras clave

Primavera árabe; Egipto; Siria; Identidades; Identidad popular.

Introducción

El uso de la terminología “primavera árabe” es problemática debido a que es una construcción de los medios de comunicación occidentales que caracterizaron las revueltas árabes con ciertos rasgos estereotipados: revueltas pacíficas realizadas por jóvenes tecnológicos que reivindicaban los derechos humanos y la transición democrática en contra de regímenes autocráticos (Gelvin, 2016). Sin embargo, no fueron tan pacíficas, sólo realizada por jóvenes ni con la democracia como única



reivindicación. Aquí utilizamos los términos “primavera árabe” y “revueltas árabes” como sinónimos, debido a su uso extendido y facilidad de manejo para nombrar los sucesos en la región desde 2011.

La primavera árabe ha sido abordada como objeto de estudio por varios autores desde diferentes disciplinas y enfoques teóricos. Como desarrollan Hmde y Jeanpierre (2016; 6), la bibliografía es abrumadora y conjuga trabajos teóricos de distinto tipo: geopolítica, estudios culturales y enfoques económicos. Se subrayó el papel de la juventud, de las tecnologías de la comunicación y el rol de la mujer (Barreñada, 2016). A pesar de la divergencia de enfoques, la interpretación dominante sugiere que las revueltas son movimientos democráticos que se caracterizan por la búsqueda de libertad y la reivindicación de derechos humanos en oposición a regímenes autoritarios (Álvarez-Ossorio, 2017; Castañeda Reyes, 2018; Conde, 2012; González del Miño, 2013; Szmolka, 2015). Aunque consideramos que son aportes pertinentes para contribuir a nuestro problema de investigación, aquí pretendemos discutir la perspectiva dominante.

De esta manera, nos proponemos analizar la construcción de identidades de las revueltas populares surgidas en 2011 en Egipto y Siria, dos países que atravesaron un período de hegemonía del nacionalismo o socialismo árabe que luego fue puesto en cuestión por el islam político. El problema de disputas discursivas no es una novedad para los estudios de la región. Nos interesa destacar dos antecedentes relevantes. Por una parte, la tesis de Ferreyra (2014) analiza las rivalidades confesionales en la guerra civil siria desde la disciplina de las Relaciones Internacionales. Por otra parte, el ensayo de Ruiz Figueroa (2013) analiza el cambio ideológico en los jóvenes egipcios a partir de la primavera árabe. No obstante, no realizan un análisis conjunto entre ambos países a partir del estudio de las identidades políticas. En este sentido, nuestro objetivo es analizar la construcción de identidades de las revueltas populares que surgieron en Egipto y Siria en 2011, teniendo en cuenta sus transformaciones históricas.

Marco teórico

Para realizar el análisis de la conformación de identidades nos valdremos del entramado conceptual de Ernesto Laclau. Para Laclau (2007, p. 197), la emergencia del pueblo depende de relaciones equivalenciales representadas hegemonícamente a través de significantes vacíos y de desplazamientos de las fronteras internas a través de la producción de significantes flotantes. El autor establece un tercer elemento: una heterogeneidad constitutiva que le otorga centralidad a la articulación política. Sin



embargo, nos centraremos en las categorías *significante vacío* y *significante flotante* a los fines del presente trabajo.

Para Laclau (2007, pp. 92-95), el discurso constituye el terreno primario de constitución de la objetividad como tal. Los elementos del discurso no son preexistentes al complejo relacional, sino que se constituyen a través de él. Dado que son identidades puramente diferenciales y como no hay ningún centro con capacidad a priori de determinación a última instancia, la totalidad debe estar presente en cada acto individual de significación. Pero, para aprehender esa totalidad es necesario aprehender sus límites, es decir, diferenciarla de algo diferente. Sin embargo, como la totalidad abarca todas las diferencias, esta nueva diferencia sería interna y no sería totalizadora. Por eso, la constitución de una identidad sólo es posible con la exclusión, es decir, se constituye a partir de una diferencia total, un antagonismo. Como la identidad se constituye con respecto al elemento excluido, todas las otras diferencias son equivalentes entre sí en su rechazo común a la identidad excluida. Aquí reside la potencia de la representación laclauiana: una diferencia, sin dejar de ser particular, puede asumir la significación universal de la totalidad. Al asumir la representación de la totalidad, la misma es transmitida a las demás particularidades de la cadena equivalencial. En consecuencia, todas las particularidades de cada identidad se dividen entre su propia particularidad y la identidad universal, gracias a la cual se logra la constitución de la totalidad identitaria, lo que el autor denomina *hegemonía*. Como esta totalidad o universalidad es un objeto imposible, la identidad hegemónica pasa a ser un *significante vacío*, transforma su propia particularidad en el cuerpo que encarna una totalidad inalcanzable.

Es importante destacar que la unidad mínima de análisis es la *demanda social*, que se caracteriza por su insatisfacción y tiene el sentido de *reivindicación*. Una identidad popular funciona como un *significante vacío* (Laclau, 2007, p. 125). Para su construcción es necesaria la unificación de una pluralidad de demandas en una cadena equivalencial; la constitución de una *frontera interna antagónica* que divide la sociedad; y la consolidación de la cadena equivalencial mediante la construcción de una identidad popular que es cualitativamente más que una simple suma de lazos equivalenciales. Esta lógica política de institución de lo social surge de las demandas sociales, mediante la articulación de la equivalencia y la diferencia, y el momento equivalencial presupone la constitución de un sujeto político que reúne una pluralidad de demandas sociales. Esto, a su vez, implica la construcción de *fronteras internas* y la identificación de un “otro” institucionalizado.



Ahora bien, la constitución de una frontera antagónica nunca se mantiene igual, sin desplazamientos. Siempre puede haber nuevas cadenas equivalenciales alternativas que intentan interrumpir otras cadenas equivalenciales. Por eso, la frontera se encuentra en tensión y en movimiento a partir de la lucha por el sentido y la significación de las demandas. El sentido del particularismo de la demanda permanece indeciso entre fronteras equivalenciales alternativas. A estos significantes con sentido “suspendido” el autor los denomina significantes flotantes. Y el modo en que se resuelve el sentido depende de la lucha hegemónica. No obstante, significantes vacíos y flotantes en la práctica se superponen, son dimensiones parciales en cualquier proceso de construcción hegemónica de pueblo. Es desde este entramado conceptual que pretendemos analizar la construcción de identidades populares en las revueltas árabes desde 2011 en Egipto y Siria. En los siguientes apartados analizamos la hegemonía del significativo nacionalismo o socialismo árabe y hacemos referencia al islam político como una cadena equivalencial alternativa que pone en crisis el sistema simbólico dominante. Contexto a partir del cual analizamos las demandas de la primavera árabe. Por último, destacamos una serie de consideraciones finales sobre el problema en cuestión.

Nacionalismo como significativo vacío

Como explica Hourani (1991; 481-488), el nasserismo en Egipto y el partido Baaz en Siria fueron movimientos de nuevo tipo que combinaron la idea del “Tercer Mundo” (frente común de países en proceso de desarrollo), la idea de la unidad árabe (Estados árabes con historia y cultura compartida) y el socialismo (distribución estatal de la riqueza social). Se articulaban en el proyecto panarabista que reafirmaba la pertenencia al mundo árabe. En el caso egipcio también al continente africano (Martín Muñoz, 1992; 226). La legitimación religiosa existía pero relegada a segundo plano.

Es importante destacar que se ubican en oposición al antiguo “bloque en el poder” oligárquico-colonial (Ayubi, 2000a; 297). El nasserismo era un movimiento, conducido por la elite militar y la figura del líder carismático, de clases medias urbanas en alianza con sectores de la burguesía que movilizaba y tenía el apoyo masivo de sectores populares (obreros y campesinos). Sin embargo, no existe una participación política de los sectores populares. Por el contrario, la acción política es confiada a la “vanguardia revolucionaria” que realiza los objetivos del pueblo.

El nacionalismo implicaba la combinación de políticas estatistas -rol central de estado en la planificación económica y social- y bienestaristas -distribución de la riqueza- (Ayubi, 2000a; 293), en el marco de un proceso de industrialización por sustitución de



importaciones (mercado internista, desarrollo de servicios sociales, infraestructura), nacionalizaciones y reforma agraria. En esta línea, el discurso nasserista resaltaba la independencia y la construcción de un Estado nacional moderno (Martín Muñoz, 1992; 223), a su vez que la “egipcianidad” era fuente de su legitimación (Martín Muñoz, 1992; 214). Como explica Ayubi (2000a; 330), en las repúblicas populistas radicales (Egipto, Siria) el Estado se convirtió en el principal elemento de política económica y social. En Siria a mediados de la década de 1960, el Estado poseía todos los bancos, la mayor parte del comercio y gran parte de la agricultura y la industria (Ayubi, 2000b; 519).

Desde estos lineamientos generales, entendemos al nacionalismo árabe como una cadena equivalencial formada de diferentes demandas sociales que son equivalentes al pertenecer a la nación árabe y construyen su identidad en antagonismo con el bloque oligárquico-colonial. El arabismo se articula con políticas estatistas y bienestaristas con distribución progresiva de la riqueza. Esto implicaba el control de la economía por parte del Estado en representación del pueblo árabe. En otras palabras, la identidad nacionalista implicaba la unidad árabe y la condición de árabe como el eslabón hegemónico de la cadena equivalencial, y se construía a partir del estatismo y bienestarismo en antagonismo con el bloque oligárquico- colonial.

Sin embargo, luego de la época de la hegemonía nacionalista -el cambio se puede datar entre 1970 con la muerte de Nasser y 1973 con la crisis del petróleo-, vendrá un periodo de apertura y liberalización como consecuencia de la intensificación de la crisis fiscal del estado y del “Consenso de Washington” (Ayubi, 2000b; pp. 558-559), surgimiento de un cuerpo científico y cultural hegemónico que ejerce influencia sobre las elites del Tercer Mundo. En Egipto, la *infitah* (“política de puertas abiertas”) es adoptada a partir de 1974, al igual que en Siria (Ayubi, 2000b, p. 522).

En 1977 Egipto firma el Tratado de Paz con Israel para la devolución del Sinaí, que simboliza la apertura a occidente y el giro hacia Estados Unidos. Sin embargo, el proceso fue realizado de manera gradual en ambos países. En Egipto, recién en 1987 se aprobó la ley de privatizaciones y las primeras se realizan en la década de 1990 (Ayubi, 2000b, pp. 494-495). En Siria, aunque no se realizaron privatizaciones, sector privado y público se interrelacionaron, por lo que se puede hablar de una privatización de facto (Ayubi, 2000b, p. 525). La apertura puso fin a las posiciones dominantes del Estado en la económica, permitiendo al capital privado penetrar en las finanzas, la industria pesada y el comercio exterior (Ayubi, 2000b, p. 497).



Islam político y significativo flotante

En los últimos cuarenta años el islam aparece como un discurso legitimador de acciones y movilizador de masas más efectivo que otros (liberal, nacional). Existen varias interpretaciones sobre el surgimiento del islam político. Para Kepel (2001; 16-17), la era islamista se inició después de la guerra de 1973 con la victoria saudí y estados exportadores de crudo (aumento del precio) y con la revolución islámica iraní de 1979 - ambos en lucha por controlar el contenido del islamismo-, pero se encontraba en la mayoría de los países musulmanes.

El islam político tiene carácter policlasista, en donde diferentes grupos sociales encuentran en su lenguaje diversas frustraciones y expectativas - económicas y sociales (Ayubi, 1996, p. 128)-, en un contexto de derrotas militares frente a Israel, el fracaso del socialismo árabe y el aumento de desigualdad social (Pérez Llana, 1991, p. 73). Desde este punto de vista, entendemos al islam político como amalgama de grupos y demandas sociales diversas aglutinadas en un discurso común. No es solo un problema de degradación económica, sino un proceso de búsqueda de identidad (Burgat, 1996, p. 41-42). La pérdida de la posición social a partir de las políticas de ajuste estructural se relaciona con la búsqueda de la identidad y moviliza a grupos alejados del poder contra la clase dirigente.

Para Sivan (1997, p. 15) el renacer del Islam, aunque activista y militante, es esencialmente defensivo, es una operación de resistencia cultural y política contra la modernidad. La confluencia entre activismo militante y pesimismo de las elites islámicas (valores, identidad y sentidos perdidos) hace surgir un discurso defensivo porque es resistencia contra la modernidad, pero no es antimodernista (volver al pasado), sino relaborar el discurso para enfrentar a la modernidad.

En Egipto, el islam político tiene origen en la derrota de 1967 e intenta ofrecer refugio en lo espiritual y lo auténtico (Ayubi, 1996, p. 110). Se convirtió en el lenguaje a través del cual la pequeña burguesía y las clases populares expresaron su resentimiento, frustración y desilusión por la corrupción y desigualdad social encarnada por la maquinaria estatal (Ayubi, 1996, pp. 120-123). Es un discurso que tuvo efectividad porque fue simple y abstracto, no ofrecía soluciones factibles sino que presentaba preocupaciones sobre la moral colectiva (Ayubi, 1996, p. 128). En Siria, el islam político fue una fuerza de oposición social y política (Ayubi, 1996, p. 130), un conflicto entre el establishment Baaz (ejército, partido, burocracia) y el islam político. Es decir, en Siria el islam político significó una lucha contra el Estado (Ayubi, 1996, pp. 135-136).



A partir de estas interpretaciones entendemos el surgimiento del islam político como una cadena equivalencial alternativa que disputa la hegemonía del nacionalismo. Para comprender esta transformación es importante tener en cuenta dos elementos. Por un lado, el islam político había quedado por fuera del Estado como oposición al nacionalismo (Pastor, 2012). Por otro lado, el contexto socioeconómico de apertura y liberalización económica con la consiguiente pérdida de posiciones dominantes del Estado bienestarista.

Ya sea por frustraciones sociales, económicas, identitarias, culturales o morales, el islam político aparece como un discurso más legitimador de acciones y movilizador de masas que el discurso nacionalista. Este último ya no aglutina grupos sociales heterogéneos, sino que encarna la imagen de corrupción, desigualdad social y es destinataria del resentimiento y la desilusión de grupos sociales que antes representaba. Sin embargo, el islam político tampoco llega a ser hegemónico como veremos en el apartado siguiente. Se configura una situación de crisis de hegemonía donde el sentido de la identidad permanece suspendido en la lucha entre cadenas equivalenciales alternativas para erigirse como el discurso aglutinador de demandas y expectativas diversas.

Primavera árabe: Demandas sin identidad popular

Como mencionamos en la introducción, la lectura predominante caracteriza la primavera árabe como antiautoritaria y democrática. Aunque Conde (2012) establece que son demandas democráticas, también recalca la falta de credibilidad de discursos de izquierda, del nacionalismo laico y el fundamentalismo religioso que se encuentra en la línea argumental del presente trabajo sobre la suspensión del sentido de la identidad o crisis de hegemonía.

Asimismo, podemos utilizar las revueltas del pan analizadas por Sadiki (2009) como ejemplo para interpretar las revueltas del 2011. Desde esta interpretación, las calles reúnen a diferentes sectores -disidentes políticos, marginales, desempleados, juventud desilusionada- en una solidaridad policlasista que pueden ser mal interpretados como movimientos de hambre (o en demandas democráticas si nos referimos al 2011). En esa solidaridad polisémica se construye un pueblo que desafía el *statu quo*. Como difundieron varias encuestas, la primavera árabe fue apoyada por el 86% de los sirios (Jabbour, 2011) y el 87% de los egipcios (Zacara, 2013).

Aquí no analizamos las causas de las revueltas ni un recuento histórico de los sucesos de las revueltas (Barreñada, 2016; Conde, 2017; Pinto, 2012). Nos interesa reflexionar



sobre la especificidad de las demandas y su articulación identitaria. Tanto en Egipto como en Siria, los actores que llevaron a cabo las revueltas fueron heterogéneos. Para Egipto, Isla Lope (2012) destaca las clases medias trabajadoras, la juventud globalizada y grupos religiosos. Para Siria, Álvarez- Ossorio (2012) destaca los partidos opositores tradicionales (socialista, nasserista y comunista), intelectuales disidentes, movimiento juvenil, sociedad civil desorganizada e integrada por musulmanes conservadores y, por último, grupos armados salafistas.

A su vez, las demandas de las revueltas árabes también se caracterizan por su heterogeneidad. Para Marín Guzmán (2012) se reclamaban demandas tan diversas como mayor participación política, apertura del sistema político, democratización, reformas económicas, pobreza, desempleo, distribución de la riqueza. Asimismo, Gelvin (2016) y Barreñada (2016) consideran que las revueltas tuvieron demandas tanto político-democráticas como económicas-sociales (justicia social, desempleo, salario, inflación, corrupción, malas condiciones de vida, falta de libertades). Con respecto al caso egipcio, para Castañeda Reyes (2012) las revueltas reclamaban fundamentalmente justicia social. Mientras que González del Miño (2013) enfatiza las demandas de búsqueda de libertad y apertura política, pero también destaca motivos económicos y sociales como el desempleo. Con respecto al caso sirio, Álvarez-Ossorio (2012) subraya las demandas de fin del autoritarismo, liberalización política, apertura democrática, defensa de los derechos humanos y libertades civiles, pero también explica que el movimiento se construía a partir de una heterogeneidad ideológica entre nacionalismo, socialismo, secularismo e islamismo. Pinto (2012) señala que inicialmente se demandaba reforma política, justicia y combate a la corrupción, pero luego el movimiento decantó hacia demandar libertad y fin del régimen baazista (incluyendo destrucción o subversión de símbolos del régimen). Conde (2017) enfatiza que las revueltas en Siria tuvieron varios motivos económicos, sociales y políticos: corrupción, falta de oportunidades, aumento de desigualdad social, desempleo, pobreza, monopolio de poder, etc.

A la vista de estas consideraciones sostenemos que las demandas de las revueltas árabes no fueron, como establece la lectura predominante, sólo demandas democráticas en contra del autoritarismo del régimen. Aunque estaban presentes, más bien fueron un cúmulo de actores y demandas heterogéneas que se aglutinaron en su antagonismo al *statu quo* y al régimen dominante. Sin embargo, la primavera árabe no convergió en la construcción de una identidad popular que pueda aglutinar las diferentes



demandas en una identidad hegemónica más allá de su rechazo al régimen dominante. En este sentido, cuanto más se extiende la cadena de equivalencias (cuantas más demandas absorbe), más débil es la conexión de las demandas que asumen la representación universal y menos probable la constitución de una subjetividad popular (Laclau, 2009, pp. 57-60).

En Siria, los diferentes actores llevaban como bandera diferentes ideales locales, religiosos y nacionales que limitó la capacidad de las revueltas para aglutinar significados diversos, generando la fragmentación del movimiento debido al sectarismo, diferencias sociales, dicotomía rural/urbano, regionalismos (Pinto, 2012). Por eso, y más allá de explicaciones geopolíticas, se pasó de un movimiento de unión entre los diferentes actores de la revuelta a una guerra civil (Conde, 2017). Como explica el autor, tres meses después de iniciada la revuelta popular, la lucha armada se convertía en un elemento central del conflicto y desde 2012 se instaló una guerra civil compleja y multifacética: lucha entre parte de la sociedad civil y el régimen baazista, conflicto geopolítico entre potencias, y guerra confesional entre islamistas. La revuelta popular se transformó en una guerra civil a gran escala entre el régimen y una oposición heterogénea donde las fuerzas islamitas ganaron protagonismo (Frente Islámico de tendencia salafí, y el Estado Islámico y Frente al-Nusra de tendencias yihadí). A su vez, estos mismos grupos con reivindicaciones similares (un Estado islámico) luchan entre sí para hacerse con el control de territorios y recursos -el Estado Islámico tiene mayor presencia y crecimiento en el último tiempo, organizándose como un protoestado (Cronin, 2015), por lo que se diferencia de Al Qaeda (Osman, 2014)-.

En Egipto, a diferencia de Siria, la primavera árabe generó la caída del gobierno de Mubarak y permitió el ascenso de nuevos actores civiles. Sin embargo, carecieron de peso específico propio frente a los principales actores clásicos: militares e islamistas (González del Miño, 2013, pp. 103-104). Aunque los Hermanos Musulmanes llegaron a la presidencia, la falta de consenso entre los diversos protagonistas, junto a la resistencia del Ejército a perder centralidad, otorga a esta institución un papel clave en el proceso, que derivó en un golpe de Estado al islamista Mohamed Mursi (González del Miño, 2013; 103). La Constitución que impulsó como presidente fue rechazada tanto por fuerzas liberales, nacionalistas y progresistas. Además, generó una amplia movilización social contra su política autoritaria que sirvió de excusa a las Fuerzas Armadas para realizar el golpe de Estado en 2013 (Szmolka, 2015; 12).



En este marco, los Hermanos Musulmanes fueron prohibidos y declarados terroristas. Por eso la caída de Mubarak no desarticula la estructura política, militar y económica. En este sentido, las revueltas populares en Egipto no generaron un antagonismo entre los nuevos actores civiles (asociativo, de barrio y de lugar de trabajo) y el régimen, sino una polarización entre el Ejército y el movimiento islamista (González del Miño, 2013; 107-112).

Consideraciones finales

En las páginas anteriores pretendimos analizar la construcción de las identidades en las revueltas populares sucedidas desde 2011 en Egipto y Siria. Con este fin, consideramos pertinente reconstruir sus disputas históricas. La constitución del nacionalismo como identidad popular implicaba la unidad y condición de árabe como eslabón hegemónico de la cadena equivalencial, en antagonismo con el bloque oligárquico-colonial. Sin embargo, en los últimos cuarenta años el islam político se constituyó como una cadena equivalencial alternativa disputando la hegemonía del nacionalismo. Fuese por frustraciones sociales, económicas, identitarias, culturales o morales, el islam político aparece como un discurso más legitimador de acciones y movilizador de masas que el discurso nacionalista. Este último ya no aglutina grupos sociales heterogéneos, sino que encarna la imagen de corrupción, desigualdad social y es destinataria del resentimiento y desilusión de grupos sociales que antes representaba.

Aunque desde la perspectiva laclauiana significantes vacíos y significantes flotantes en la práctica se superponen porque son dimensiones parciales en cualquier proceso de construcción hegemónica, creemos que analíticamente podemos diferenciar dos momentos: un primer momento donde el nacionalismo se constituye como significativo vacío y un segundo donde el islam político aparece como una cadena alternativa que disputa la hegemonía. Como el islam político tampoco llega a ser hegemónico, implica una crisis de hegemonía donde el sentido de la identidad permanece suspendido en la lucha entre cadenas equivalenciales alternativas por erigirse como el discurso aglutinador de demandas diversas.

Es en este marco que comprendemos las revueltas populares desde 2011 en Egipto y Siria. Relativizando la lectura dominante de la primavera árabe como democrática y antiautoritaria, sostenemos que pueden ser entendidas en un contexto donde los discursos nacionalista e islamista no tuvieron la capacidad de aglutinar las nuevas demandas sociales.



Las revueltas populares de la primavera árabe fueron protagonizadas por actores heterogéneos -disidentes políticos, desempleados, juventud desilusionada, grupos islamitas- y demandas heterogéneas -económicas, sociales, políticas, democráticas- que se constituyeron desafiando al régimen y *statu quo* dominante. Aunque se aglutinaron actores y demandas heterogéneas en antagonismo al régimen dominante, no se constituyó una identidad popular con la capacidad de unificar diferentes demandas en una identidad hegemónica más allá del antagonismo al régimen. En otras palabras, la cadena equivalencial fue incapaz de constituir un sujeto popular a partir de la investidura radical de un particular como universal debido al débil vínculo entre la diversidad de demandas.

En Siria, este proceso desembocó en una guerra civil compleja y multifacética, donde el antagonismo régimen-oposición se diluyó debido a los múltiples conflictos y a la heterogeneidad de la oposición. En Egipto, aunque la primavera árabe generó la caída del gobierno de Mubarak, no se constituyó un antagonismo entre los actores de las revueltas y el régimen, sino una polarización entre el Ejército y el movimiento islamista que implicó la permanencia de la estructura política, militar y económica dominante con el retorno del Ejército a la presidencia mediante un golpe de Estado.

Como explica Laclau (2014, pp. 19-20), la protesta social tiene una dimensión horizontal de autonomía en tanto opera de un modo que rebasa las capacidades de canalización de los marcos institucionales existentes. Es decir, las lógicas equivalenciales por oposición a un antagonismo. Sin embargo, esta autonomía no puede lograr un cambio histórico sin la dimensión vertical de hegemonía. Es decir, la conducción de los movimientos de protesta para generar una radical transformación del Estado. La primavera árabe rebasó en un principio las capacidades de canalización institucionales puesto que se constituyeron como equivalencias en oposición a un "otro" institucionalizado, pero no tuvo la capacidad hegemónica de transformar las diversas demandas en una identidad popular.

Para concluir, el presente trabajo es una primera aproximación para seguir problematizando la conceptualización sobre la formación de las identidades políticas y seguir reflexionando sobre los movimientos populares en Medio Oriente.

Notas

¹(nachorobba@gmail.com) – Licenciado en Sociología y estudiante de Maestría en Teoría Política y Social (Universidad de Buenos Aires).



Bibliografía

- Álvarez-Ossorio, I. (2012). La sociedad civil ante la intifada. En Mesa Delmonte, L. (coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen. Protestas sociales y conflictos en África del norte y en Medio Oriente*. México: Colegio de México.
- Álvarez-Ossorio, I. (2017). La fractura del campo islamita en el conflicto sirio. En Conde, G. (coord.), *Siria en el torbellino: insurrección, guerras y geopolítica*. México: Colegio de México.
- Ayubi, N. (1996). Los movimientos islamistas: estudios por países, I. En Ayubi, N., *El islam político. Teorías, tradición y rupturas*, pp. 107-144. Barcelona: Bellaterra.
- Ayubi, N. (2000a). El sistema político de las formas articuladas: las repúblicas populistas radicales". En Ayubi, N., *Política y sociedad en oriente próximo: La hipertrofia del estado árabe*, pp. 289-327. Barcelona: Bellaterra.
- Ayubi, N. (2000b). Liberalización económica y privatización: ¿se contra el estado árabe? En Ayubi, N., *Política y sociedad en oriente próximo: La hipertrofia del estado árabe*, pp. 479-574. Barcelona: Bellaterra.
- Barreñada, I. (2016). Las revueltas árabes y el papel de los movimientos sociales. En Conde, G., Tawil, M. y Pastor, C. (edits), *Mundo árabe: levantamientos populares, contextos, crisis y reconfiguraciones*. México: Colegio de México.
- Burgat, F. (1996). Los itinerarios de un malentendido. En Burgat, F., *El islamismo cara a cara*, pp. 27-47. Barcelona: Bellaterra.
- Castañeda, J.C. (2012). El movimiento popular en Egipto en 2011: resultados primeros y tareas futuras. En Mesa Delmonte, L. (coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen. Protestas sociales y conflictos en África del norte y en Medio Oriente*. México: Colegio de México.
- Castañeda Reyes, J.C. (2018). Los logros y los errores de un proceso de insurrección popular: Egipto, 2011-2014. En *Revista de Estudios de Asia y África*, 53 (2), pp. 267-292.
- Conde, G. (2012). Los movimientos populares árabes de 2011 y su significado histórico. En Mesa Delmonte, L. (coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen. Protestas sociales y conflictos en África del norte y en Medio Oriente*. México: Colegio de México.
- Conde, G. (2017). Génesis del torbellino sirio: insurrección, represión y guerras. En Conde, G. (coord.), *Siria en el torbellino: insurrección, guerras y geopolítica*. México: Colegio de México.



- Cronin, A.K. (2015). El Estado Islámico no es un grupo terrorista: por qué el contra-terrorismo no va a frenar a la nueva amenaza jihadista. En *Foreign Affairs*, 94 (2).
- Ferreyra, M.D.A. (2014). Las rivalidades confesionales en la guerra civil siria y el accionar de Arabia Saudita e Irán. Un análisis desde sus Fuerzas Profundas. En *Repositorio de tesinas de grado*. Rosario: UNR.
- González del Miño, P. (2013). La incierta transición en Egipto. Expectativas en el contexto de la post-primavera árabe (2011-2013). En *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, (115), pp. 103-125.
- Gelvin, J. (2016). Comprendiendo las insurrecciones árabes. En Conde, G., Tawil, M. y Pastor, C. (edits), *Mundo árabe: levantamientos populares, contextos, crisis y reconfiguraciones*. México: Colegio de México.
- Hmde, C. y Jeanpierre, L. (2016). Révolutions et crises politiques au maghreb et au machrek. En *Actes de la recherche en sciences sociales*, 1 (211-212), pp. 4- 23.
- Hourani, A. (1991). La culminación del arabismo (décadas de 1950 y 1950). En Hourani, A, *La historia de los árabes*, pp. 481-496. Buenos Aires: Vergara.
- Isla Lope, J. (2012). La influencia de las condiciones estructurales en los movimientos populares en el mundo árabe. En Mesa Delmonte, L. (coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen. Protestas sociales y conflictos en África del norte y en Medio Oriente*. México: Colegio de México.
- Jabbour, J. (2011). Les révolutions arabes vues par les Arabes. En *Agencia Telos*. Disponible el 12 de abril de 2018 en <https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/les-revolutions-arabes-vues-par-les-arabes.html>
- Kepel, G. (2001). *Las Yihad, expansión y declive del islamismo*. Barcelona: Península.
- Laclau, E. (2007). *La Razón Populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Laclau, E. (2009). Populismo: ¿qué nos dice el nombre? En Panizza, F. (comp.), *El populismo como espejo de la democracia*, pp. 51-70. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Laclau, E. (2014). *Los fundamentos retóricos de la sociedad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Marín Guzmán, R. (2012). Política y represión en el Medio Oriente y el Norte de África: dos importantes causas de las manifestaciones sociales en la actualidad. En Mesa, Dalmonte (coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen. Protestas sociales y conflictos en África del norte y en Medio Oriente*. México: Colegio de México.



- Martin Muñoz, G. (1992). El nuevo orden del Egipto contemporáneo. En Martin Muñoz, G., *Política y elecciones en el Egipto contemporáneo (1922-1990)*, pp. 213-252. Madrid: Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe.
- Osman, T. (2014). La paradoja de Daesh y la desilusión política. En *Deciphering Daesh: Origins, Impact and Future*. Doha: Al Jazeera Center for Studies.
- Pastor, C. (2012). Revueltas y revoluciones en el Medio Oriente moderno. En Mesa Delmonte, L. (coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen. Protestas sociales y conflictos en África del norte y en Medio Oriente*. México: Colegio de México.
- Pastor, C. (2015). Movilización y modernidad en el Medio Oriente. En *Revista de Estudios de Asia y África*, 53 (2), pp. 141-169.
- Pérez Llana, C. (1991). Los protagonistas regionales de la guerra y de la paz. En Pérez Llana, C., *De la Guerra del Golfo al Nuevo Orden*, pp. 67-107. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
- Pinto, P. (2012). Yallah Irhal Ya Bashar: protestas, violencia y fragmentación social en el levantamiento sirio. En Mesa Delmonte, L. (coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen. Protestas sociales y conflictos en África del norte y en Medio Oriente*. México: Colegio de México.
- Ruiz Figueroa, M. (2013). Una lectura de la “Primavera Árabe” en Egipto. El cambio ideológico en una parte de la población. En *Revista de Estudios de Asia y África*, 48 (3), pp. 777-803.
- Sadiki, L. (2009). Los catalizadores desde abajo: transición democrática y revueltas del pan. En *Rethinking Arab Democratization: Elections without Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Sivan, E. (1997). *El islam radical*. Barcelona: Bellaterra.
- Szmolka, I. (2015). Introducción: actores y dinámicas de cambio en el Norte de África y Oriente Próximo. En *Revista CIDOB d’Affers Internationals*, (109), pp. 7-21.
- Zacara, L. (2013). Del “11S” a la “primavera árabe”: ¿Qué nos dice la opinión pública árabe? En *Revista Estudios Internacionales*, 1 (1), pp. 95-108.



Movimento de Cultura Popular no Recife, Pernambuco, Brasil: A Educação de Adultos em diálogos com a Cultura Popular

Stefani Tamires Alves Ribeiro Holanda¹
Mário de Faria Carvalho²

Resumo

A pesquisa propõe algumas reflexões acerca das ações desenvolvidas pelo Movimento de Cultura Popular e suas implicações no que diz respeito a educação de adultos do Recife nos anos de 1962 e 1964. Pretendendo problematizar a importância das ações desenvolvidas pelo MCP na educação de adultos do Recife, nos anos indicados, e refletir o que essas ações representaram para a importância da valorização cultural, surgiu a problemática desta pesquisa: *Quais as principais contribuições do Movimento de Cultura Popular para a Educação de Adultos do Recife no período de 1962 a 1964?* Trata-se de um estudo de natureza documental, instrumentalizado a partir da análise de documentos e em diálogo com a bibliografia especializada. Os resultados apontam que o MCP tinha como objetivo a elevação cultural do povo e enxergava na educação o caminho para a transformação real daqueles sujeitos. Dessa maneira, visualizava a educação para além da alfabetização de adultos, por entendê-la como meio para uma transformação social e política da população. Buscando uma integração das dimensões culturais e políticas em suas ações, possibilitando uma nova perspectiva educacional.

Palavras chave

Educação de Adultos; Movimento de Cultura Popular; Educação Popular; Recife.

Resumen

La investigación propone algunas reflexiones sobre las acciones desarrolladas por el Movimiento de Cultura Popular y sus implicaciones con respecto a la educación de adultos de Recife en los años 1962 y 1964. Con la intención de cuestionar la importancia de las acciones desarrolladas por el MCP en la educación de adultos de Recife, En los años indicados, y para reflejar lo que estas acciones representaban para la importancia de la valorización cultural, surgió el problema de esta investigación: ¿Cuáles fueron las principales contribuciones del Movimiento de Cultura Popular para la Educación de Adultos en Recife de 1962 a 1964? Este es un estudio documental, basado en el análisis de documentos y en diálogo con la bibliografía especializada. Los resultados indican que el MCP tenía como objetivo la elevación cultural de las personas y vio en la educación el camino para la transformación real de esas materias. De esta manera,



visualizó la educación más allá de la alfabetización de adultos, ya que la entendió como un medio para una transformación social y política de la población. Buscando una integración de las dimensiones culturales y políticas en sus acciones, permitiendo una nueva perspectiva educativa.

Palabras clave

Educación para Adultos.; Movimiento de la Cultura Popular; Educación Popular; Recife.

Introdução

Esta pesquisa aborda algumas reflexões acerca das ações desenvolvidas pelo Movimento de Cultura Popular e suas implicações no que diz respeito a Educação de Adultos do Recife nos anos de 1962 e 1964. Considerando que o Movimento de Cultura Popular (MCP), no Recife, já apresentava posturas de enfrentamento ao pensamento hegemônico, apresentando possibilidades outras para o pensar.

O Movimento de Cultura Popular apresentou, por meio da educação, arte e cultura possibilidades para um despertar da população recifense para sua condição social e política. A tríade apresentava uma ameaça aos modelos hegemônicos construídos no Recife. Compreendemos que a relação da educação, arte e cultura está imbricada no processo da construção do ser. Por meio delas, as pessoas encontram possibilidades para um pensar crítico, reflexivo, autônomo.

O MCP, a partir de uma perspectiva emancipatória, buscou, por meio da relação educação, arte e cultura, uma tentativa de transformação real da população que se encontravam em um contexto de miséria e altos índices de analfabetismo. O MCP emergiu em um contexto de alta taxa de analfabetismo da população com a proposta de reverter tais índices. Os integrantes do Movimento observavam as pessoas pela lente da Educação Popular, reconhecendo-as como protagonistas de suas histórias e agentes transformadoras onde já sinalizava um movimento de desobediência.

As pessoas constroem significados diferentes durante a construção do seu processo educativo, sendo escolar ou não escolar, e durante o seu percurso buscam estratégias diferentes para lidar com as heranças coloniais. Ao passo que, despertar a compreensão para enfrentar tais heranças é necessário um esforço para resistir e supera-las. O despertar está relacionado com a compreensão que existem possibilidades outras de enfrentamento. Dessa forma, pretendemos problematizar a importância das ações desenvolvidas pelo MCP na educação de adultos do Recife, nos



anos indicados, e refletir o que essas ações representaram para a importância da valorização cultural. A partir destas reflexões surge a problemática da nossa pesquisa: *Quais as principais contribuições do Movimento de Cultura Popular para a Educação de Adultos do Recife no período de 1962 a 1964?*

A construção do objeto de pesquisa se inicia a partir da compreensão da importância de refletir as ações mobilizadas pelo MCP na Educação de Jovens e Adultos para importância da valorização cultural enquanto uma proposta educativa. A partir da questão levantada, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em: Compreender quais as principais contribuições do Movimento de Cultura Popular para a Educação de Adultos do Recife no período de 1962 a 1964. Para percorrer esse movimento de construção do conhecimento tomamos como objetivos específicos: Identificar as ações desenvolvidas pelo MCP; Analisar as principais contribuições do Movimento de Cultura Popular para a Educação de Adultos do Recife; sistematizar os objetivos proposto pelo MCP;

Para uma melhor compreensão da discussão aqui proposta, nosso artigo aborda, na primeira seção, algumas reflexões sobre o Movimento de Cultura Popular, propomos, igualmente, uma discussão acerca da Educação de Jovens e Adultos e Cultura Popular. Na segunda seção, trabalhamos o percurso metodológico da nossa pesquisa, bem como ela se justifica e os instrumentos utilizados. Na terceira e última seção, destacamos os resultados da nossa pesquisa seguida das considerações finais.

Fundamentação teórica

Movimento de Cultura Popular do Recife nos anos 60: alguns aspectos

Sabe-se que a cultura sempre esteve imbricada ao processo de educação das pessoas. Considerando a realidade de uma sociedade capitalista, torna-se pertinente refletir sobre a importância da valorização da Cultura Popular. A proposta de uma educação por meio da valorização de cultura popular foi desenvolvida por Paulo Freire em 1960, “como possibilidade de articular e fundamentar sua proposta e/ou sistema de educação, contemplando da alfabetização à universidade” (Brandão & Fagundes, 2016, p. 89).

Os movimentos populares que compartilhavam tal perspectiva ganharam força como uma possibilidade para o despertar das pessoas por meio de um diálogo entre educação e cultura popular. Segundo Brandão & Fagundes: “a ideia de uma nova cultura popular irrompe como uma alternativa pedagógica de trabalho político, que parte da cultura e se realiza por meio da cultura” (2016, p. 95).



A proposta de cultura popular representa um enfrentamento à cultura de dominação hegemônica. Pois a mesma trata das culturas dos povos, culturas em diálogo com as subjetividades.

Os movimentos de cultura popular partem do princípio de que o trabalho de transformar e significar o mundo é o mesmo que transforma e significa o homem e a mulher. Como uma prática sempre coletiva e socialmente significativa, o ser humano se realiza através de ações culturalmente tidas como necessárias e motivadas. Assim, a própria sociedade, em que o homem e a mulher se convertem em um ser humano, é parte da/s cultura/s, no sentido mais amplo que se possa atribuir a esta palavra (Brandão & Fagundes, 2016, p. 95)

Segundo Brandão & Fagundes (2016, p. 96), “as propostas de cultura popular dos anos de 1960 propõem uma radical inversão, em termos do que se pensava sendo o processo da cultura”, pois essa representava uma ruptura social da desigualdade de como se hierarquizava o que era cultura.

O MCP e a Educação de Jovens e Adultos constroem suas significações com base nos fundamentos do que chamamos hoje por Educação Popular, que é fundamentada nos princípios da Cultura Popular. Ambos buscavam a ruptura das estruturas de domínio, de posições binárias que insistem em categorizar as pessoas por hierarquias. A cultura popular estabelece uma relação com os múltiplos saberes, experiências, crenças e valores da população, pois está intimamente ligada às sensibilidades.

Em 1960 o cenário do Recife desenhou-se em resposta ao crescente clamor da população por uma transformação, devido ao crescimento de migração das pessoas da zona rural para a metrópole, em decorrência disso, as altas taxas de analfabetismo, carência e precariedade das condições sociais e habitacionais. Foi em tal contexto, que surge um dos movimentos mais expressivos de educação e cultura popular, o Movimento de Cultura Popular, com o apoio do então prefeito Miguel Arraes (Barbosa, 2009)

O MCP materializou-se em um cenário onde a taxa do analfabetismo atingia cerca de 50% da população. A criação do Movimento tinha a intencionalidade de elevar os índices de alfabetização e contou com a participação de estudantes universitários, intelectuais, artistas, entre outros.

O Movimento de Cultura Popular foi seu próprio laboratório de experiências pedagógicas inovadoras. Inicialmente sua criação era voltada para reverter os índices do



analfabetismo e, seguindo uma perspectiva de educação popular, direcionou seus esforços para a transformação da população por meio da conscientização e valorização cultural, onde “a transformação social é percebida como processo histórico em que subjetividade e objetividade se prendem dialeticamente”. (Freire, 2008, p. 30)

Por meio do MCP a sociedade Recifense começou a conhecer um movimento de politização da cultura e da educação, onde o povo era o protagonista da ação (Texeira, 2008). A proposta era a preparação do povo para a vida e para o trabalho por meio da elevação do nível cultural daquela população por meio da educação, arte e cultura. A construção do conhecimento pautava-se por meio da relação dialógica, onde não existia uma hierarquização dos saberes, pois essas “não podem ser definidas a partir da soberania epistêmica” (Nunes, 2010, p. 284), mas sim um diálogo entre o conhecimento produzidos pelas disciplinas e os saberes existentes do povo, bem como seus aspectos culturais.

O MCP buscou uma construção de uma educação na qual não existia um saber único e sim saberes múltiplos para a um movimento emancipatório onde “a educação para a libertação é um ato de conhecimento e um método de ação transformadora que os seres humanos devem exercer sobre a realidade” (Freire, 2015. p.147). Os educandos não eram somente receptores do conhecimento, mas assumiam o seu papel de ação no processo de construção do conhecimento, porque “o ato de conhecer envolve um movimento dialético que vai da ação à reflexão sobre ela e desta a uma nova ação” (Freire, 2015. p. 80).

O MCP no Recife se propôs a semear as concepções de uma educação crítica e reflexiva, valorização da cultura e da arte como possibilidades para alcançar uma verdadeira transformação social. A educação representava muito além de uma educação bancária, alertada por Freire (2008), por compreender que a educação não é neutra e que ela representa um ato político. Seguimos na perspectiva Freire no sentido de compreender a alfabetização de adultos como um ato político, pois o processo de conhecimento envolve uma troca com a realidade,

Uma alfabetização de adultos que, em lugar de propor a discussão da realidade nacional e de suas dificuldades, em lugar de colocar o problema da participação política do povo na reinvenção da sua sociedade, estivesse girando em volta dos ba-be-bi-bo-bu, a que juntasse falsos discursos sobre o país – como tem sido tão comum em tantas campanhas -, estaria contribuindo para que o povo fosse puramente representado na sua História (Freire, 2008, p. 41-42).



Pensar uma educação para e com as pessoas a quem destina-se é participar de uma construção do saber emancipatório, mobilizando assim, uma educação que tenha significado reais para a população.

Educação de Jovens e Adultos: Uma leitura dos códigos e uma leitura da vida

Sabemos que a educação está presente em todos os momentos de aprimoramento humano, inicia-se no convívio familiar, caminha para a sociedade e estende-se nos processos de educação formal. A educação no contexto escolar assume uma postura preparatória que segue padrões hegemônicos, uma hierarquização epistêmica. Enquanto as pessoas que não tiveram acesso ao domínio dos códigos das letras acabam por ser marginalizadas.

As/os estudantes da EJA que tiveram interrupções, por inúmeras razões, nos seus percursos escolares e que buscam esse retorno, foram reféns de uma lógica de dominação que exclui as pessoas de camadas populares que se encontram à margem e que em seu retorno precisam lidar com esses fatores novamente, mas com uma nova compreensão.

Desse modo, “reconstruir o trajeto de retorno e de ‘inscrição simbólica’ no espaço escolar é um dos primeiros desafios no trabalho com estes homens e mulheres marcados por situações escolares, inúmeras vezes, desfavoráveis”. (Moll, 2004, p. 12). Pode-se dizer que, compreendendo as especificidades que caracterizam a Educação de Jovens e Adultos, assim como seu público, o Movimento de Cultura Popular no Recife logrou êxito ao traçar caminhos alternativos para atender essas especificidades. Buscou por meio da pedagogia freireana uma educação por meio do diálogo, substituindo o silenciamento pelo dizer da palavra.

Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma autoritária, centrada na compreensão mágica da palavra, palavra doada pelo educador aos analfabetos; se antes os textos geralmente oferecidos como leitura aos alunos escondiam muitos mais do que desvelam a realidade, agora, pelo contrário, a alfabetização como ato de conhecimento, como ato criador e como ato político é um esforço de leitura do mundo e da palavra (Freire, 2008, p.30)

O MCP representou um movimento epistêmico muito significativo para a Educação de Jovens e Adultos do Recife, que por meio de uma pedagogia voltada para a formação humana apresentou estratégias e posicionamentos de valorização da palavra que antes



foi silenciada e por meio do MCP redescobrem sua entonação e se comunicam consigo e com o mundo.

Aspectos metodológicos

Compreendemos que esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa por tratar de um estudo que busca lidar com interpretações das realidades sociais (Bauer & Gaskell, 2015, p. 23). Dentro da abordagem mencionada, consideramos a pesquisa desenvolvida numa perspectiva de natureza documental. Entendemos que a mesma propõe considerar e interpretar algumas atribuições e significados que foram construídos nos documentos relacionados ao MCP e a sua relação com a Educação de Adultos.

O percurso teórico-metodológico considera a relação entre as ações do Movimento de Cultura Popular do Recife, no período de 1962 e 1964, e a Educação de Jovens e Adultos em diálogo com a Cultura Popular. Por se tratar de um estudo de natureza documental, instrumentalizamos este estudo a partir da análise do documento de criação do próprio MCP nomeado de Plano de ação para 1963 e o Registro Especial de Títulos e Documentos, que se encontram disponível no banco de dados referente ao Fórum da EJA.

Optou-se pela referida base de dados pelo fato de a mesma trazer em seu conteúdo documentos referentes ao MCP, como por exemplo, a digitalização das versões originais dos documentos do MCP em sua amplitude e alguns dos materiais usados pelo Movimento em seus programas. Outra justificativa pela sua escolha foi a necessidade de reunir os documentos existentes disponíveis relacionados ao MCP, uma vez que o Movimento teve boa parte considerável dos seus documentos destruídos durante a Ditadura Militar.

O tratamento dos dados das produções selecionadas se desenvolveu através da análise de conteúdo apresentados por Bardin (2016) que categoriza como “[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemático e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens” (p. 33). A escolha pela análise de conteúdo relaciona-se com nossa proposta para uma melhor organização das mensagens contidas nos documentos, uma vez que a análise sistematiza o conteúdo neles contidos (Bardin, 2016, p. 52).



Conforme assinalado por Bauer & Gaskell a análise de conteúdo nos permite uma reconstrução de valores, opiniões, cosmovisões, comparando-as (2015, p. 192), evidenciando uma possibilidade de leitura outra e diversificada.

A fase da pré-análise serviu de base para a organização dos documentos e das mensagens encontradas nos documentos selecionados. Inicialmente fizemos uma leitura flutuante para chegar a escolha dos documentos a serem estudados, o Plano de Ação para 1963 e o Registro Especial de Título e Documentos. A escolha se deu por ambos trazerem em seu escopo informações que acreditamos ser essenciais para uma aproximação compreensiva sobre o Movimento e suas propostas.

Em seguida realizamos a exploração cuidadosa do material selecionado, onde foram demarcados, inicialmente, os objetivos gerais em que o MCP se propôs a alcançar e, posteriormente, as ações que foram planejadas para alcançar os objetivos. Em um momento seguinte, foi feita a sistematização dos objetivos pretendidos em cada ação planejada para aquela época. Para uma melhor organização e sistematização das informações necessárias, optamos por uma categorização com base em objetivos a serem alcançados e ações pretendidas pelo MCP. Por fim, foi feita a interpretação das informações contida nos documentos mencionados.

Resultados

Revisitando as principais ações desenvolvidas pelo MCP

Ao revisitar os documentos que registram a história do MCP, assim como suas ações, observamos que o Movimento desenvolveu, naquele período, o seu próprio laboratório de possibilidades de construção do conhecimento, buscando não seguir um modelo estático, único e imutável. Buscaram construir suas possibilidades de conhecimento no coletivo, baseado nas especificidades da população.

Desenvolveram uma proposta que considerasse a cultura popular como um caminho para alcançar a população como indicado no seu plano de ação que “qualquer movimento de cultura popular deve ter como diretriz suprema orientadora do conjunto de suas atividades a deliberação de se incorporar ao esforço comum desenvolvido pelo movimento popular na luta pela consecução de seus objetivos próprios” (MCP, 1963, p. 5). Tratava-se de uma proposta que colocasse os problemas enfrentados pela população no bojo da discussão.

Assim como consta no seu plano de ação, “a partir dessa perspectiva, o movimento de cultura popular desempenha papel de poderosos auxiliar na solução dos problemas



culturais com que se defrontam as massas em luta” (MCP, 1963, p. 5). Para alcançar esses direcionamentos o MCP desenvolveu ações voltadas para atender essas demandas de elevação social e cultural da população, desenvolveu a proposta de seu projeto contando com:

201 escolas, 624 turmas;

19. 646 alunos, entre crianças, adolescentes e adultos;

Uma rede de escolas radiofônicas;

Um centro de artes plásticas e artesanato, com cursos de tapeçaria, tecelagem, cerâmica, cestaria, cartonagem, fantoches, pinturas, desenho, estamperia, modelagem, gravura e escultura (destinado principalmente a especializar o professorado do próprio MCP);

452 professores e 174 monitores, ministrando o ensino correspondente ao primeiro grau, supletivo, educação de base e educação artística;

Uma escola para motoristas-mecânicos;

Cinco praças de cultura; as praças em tela levam ao povo local bibliotecas, teatro, cinema, tele-clubes, música, orientação pedagógica, jogos infantis, educação física;

Centro de Cultura Dona Olegarina, no Poço da Panela, em colaboração com a Paróquia de Casa Forte, com tele-clubes, curso de corte e costura, alfabetização e educação de base;

Círculos de cultura;

Galeria de arte;

Conjunto teatral, tendo encenado as seguintes peças: “Chapeuzinho Vermelho”, de Paulo Magalhães; “Um menino nos foi dado”, de Dom Marcos Barbosa; “A derradeira ceia”, de Luiz Marinho; “Julgamento em Novo Sol”, de Nelson Xavier, Boal, Trevisan, Caruso e Benedito Araújo; e a “Volta do Camaleão Alface” de Maria Clara Machado (Rosas, 1986, p. 11)

A proposta educativa do MCP trouxe aspectos inovadores e significativos para a educação de pessoas jovens e adultas naquele contexto, uma vez que na base da sua proposta formativa contava com a alfabetização por meio de palavras geradoras. A escolha das palavras geradoras como ponto de partida se dava pela mobilidade de construir diálogos a partir da realidade vivida. Seguindo essa perspectiva educativa freireana, o Círculo de Cultura e o Livro de leitura para adultos foram grandes aliados.



O plano de ação para 1963 indica ações que seguem essa possibilidade educativa “Núcleo de cultura popular, Meio informais de educação, alfabetização e educação de base, editorial e imprensa, teatro, cinema, esporte, artes plásticas e artesanato, dança, canto e música popular, ensino elementar, pesquisas, administração” (MCP, 1963).

Ao propor uma alfabetização por meio de palavras geradoras, o Movimento não seguia um modelo de repetição, mas tratava-se uma educação que possibilitasse a reflexão. “No que diz respeito à alfabetização de adultos, a educação que Paulo Freire propõe não é apenas a alfabetização. Pega a palavra geradora “arroz”, por exemplo, e deriva para as questões econômicas” (Beisiegel, 2013, p. 174). As ações mobilizadas pelo MCP demonstraram sua significativa preocupação em uma educação para a uma verdadeira transformação.

Ao pensar sobre a proposta dos círculos de cultura proposto por Paulo Freire no MCP, Beisiegel ressaltava que “quando o MCP foi fundado, Paulo propôs o funcionamento de círculos de cultura: reunia operários e homens do povo de Recife para debater temas tais como ligas camponesas, socialismo etc” (2013, p. 176) Evidenciando a importância do pensar a educação para além dos muros escolares, pensando uma educação para a vida daquelas pessoas. As propostas educativas do MCP indicaram partir da valorização dos saberes já existentes ampliando as possibilidades reflexivas para uma transformação social.

Outro grande aliado do MCP para o alcançar a população foi a criação do livro de Leitura para Adultos de Josina Godoy e Norma Coelho, que contava com as obras de Abelardo da Hora, fotografias de Saraiva e Cleto; de Gilvan F. da Silva, Ajax Pereira, Robert Chorovsky, Johannes Friese, Elijah von Sosten, apresentado no Salão do Estado de Pernambuco em 1962. O livro consistia em uma proposta de alfabetização por meio de frases que permeavam a realidade da população carente do Recife.

Sobre a obra, Coelho (2002) aponta que era “centrado nos interesses do adulto, exprimindo os anseios populares, ressaltando os valores regionais, ministrando ao mesmo tempo o ensino da língua e da gramática, ele constituirá, sem dúvida, mais um instrumento da cultura para a emancipação do povo”. (Coelho, 2002) O livro trouxe em seu bojo diálogos para o desenvolvimento da construção do conhecimento para a conscientização e libertação.



Sistematizando os objetivos proposto pelo MCP no Recife

O Movimento de Cultura Popular teve sua criação em 1960, a sua sede estava situada no Sítio da Trindade na Estrada do Arraial. Durante a criação do Estatuto do MCP, foi estabelecido como objetivos em seu art. 1º:

1. *Promover e incentivar, com a ajuda de particulares e dos poderes públicos, a educação de crianças e adultos;*
2. *Atender ao objetivo fundamental da educação que é o de desenvolver plenamente todas as virtualidades do ser humano, através de educação integral de base comunitária, que assegure, também, de acordo com a Constituição, o ensino religioso facultativo;*
3. *Proporcionar a elevação do nível cultural do povo, preparando-o para a vida e para o trabalho;*
4. *Colaborar para a melhoria do nível material do povo, através de educação especializada;*
5. *Formar quadros destinados a interpretar, sistematizar e transmitir os múltiplos aspectos da cultura popular; (MCP, 1961, p. 1)*

Em sua elaboração da proposta de ação para o ano de 1963, o MCP elegeu algumas linhas de ações para alcançar os objetivos pretendidos. As linhas de ação estabelecidas foram: “Núcleos de cultura Popular; Meios Informais de educação; Alfabetização e educação de base; Editorial e Imprensa; Teatro; Cinema; Esporte Artes plásticas e artesanato; Dança, canto e música popular; Ensino elementar; Pesquisas; Administração” (MCP, 1963, p. 15). Dentre os objetivos relacionados às ações do MCP, destacamos os objetivos abordados nos Núcleos de cultura popular por sua abrangência deixar um panorama das pretensões das ações pretendidas. Os objetivos elencados são:

- A. *Fornecer às organizações populares os elementos de cultura popular capazes de incrementar suas atividades culturais internas e suas manifestações culturais junto à comunidade;*
- B. *Auxiliar as organizações populares a se expandirem e a se aprofundarem entre todas as camadas do povo [...];*
- C. *Desenvolver a consciência do povo através da criação ou da expansão de departamentos culturais nas organizações populares, no sentido de aprofundar a compreensão da problemática brasileira e da necessidade de transformações radicais nas estruturas econômicas, sociais e políticas por meio das ações de massas;*



D. Auxiliar as organizações populares, e setores diversos do povo, a formularem suas plataformas reivindicatórias no quadro geral da problemática econômica, social e política brasileira e nordestina.

E. (MCP, 1963, p.)

Observamos que os objetivos que foram construídos para o Núcleo de Cultura Popular revelam um aspecto de valorização cultural compreendendo sua dimensão educativa para uma formação para a vida. Outro aspecto a ser destacado dos objetivos que o MCP estabeleceu em relação a educação, foi o dos Meios Informais de educação que buscou facilitar para a população o acesso à mesma por meio de informação e recreação. Os documentos revelam uma relação entre a educação e a cultura para uma formação pessoal, política e social quando propuseram “incentivar tomadas de posição das camadas populares da comunidade, colaborando na reivindicação de seus direitos” (MCP, 1963, p.)

O Projeto de Meios Informais de Educação estabeleceu também como objetivo formas de organização do povo por meio da coletividade. Esse objetivo evidencia a tentativa de fortalecimento de lideranças por meio do coletivo para a transformação social necessária. Uma outra proposta do Movimento foi a criação do Projeto de Alfabetização e Educação de Base que possuía como objetivo a Alfabetização de adultos devido ao alto índice de analfabetismo. A Educação de base consistia basicamente no “ensino de linguagem, matemática, educação sanitária, história, geografia e política” (MCP, 1963), evidenciou uma proposta formativa que estivesse relacionada com a consciência das problemáticas daquele contexto vivido.

Sobre o Projeto Editoria e Imprensa, consta no plano de ação para 1963 que dentre os seus objetivos estava o desenvolvimento de atividades editoriais voltadas para elementos de valorização da cultura popular. Propondo atingir em sua amplitude as camadas populares “através das diferentes modalidades de publicações” (MCP, 1963). Sua proposta articulou-se para que as diversas atividades jornalísticas alcançassem um nível de informação educativa para aquela população.

Em relação ao Projeto do Teatro, os objetivos da proposta circundaram nas expressões das problemáticas da população, buscando “elevar, por meio de teatro, o nível de consciência política das massas, de modo a que as próprias massas assumam seu papel histórico social” (MCP, 1963). Um dos grandes nomes em torno da materialização dessa proposta é o Teatro do Oprimido de Augusto Boal.



O projeto de Cinema construiu como objetivo “equacionar em linguagem cinematográfica, os problemas fundamentais com que se defronta o povo, focalizando filmicamente essa problemática em termos de documentário de ficção” (MCP, 1963), buscando meios por meio da arte para o povo a interpretação social e cultural. Enquanto que o Projeto de Esporte estabeleceu o desenvolvimento de atividades físicas para uma construção de vínculos com a comunidade.

A proposta do Projeto de Artes Plásticas e Artesanato trouxe em seu escopo o incentivo de atividades tradicionais no campo da arte, visando uma ocupação para as famílias de baixa renda. Assim como, “mobilizar os artistas plásticos no esforço de elevar o nível artístico do artesanato; incentivar e popularizar as artes plásticas” (MCP, 1963). Outro esforço, visando a valorização cultural da população, foi a criação do Projeto de Dança, Canto e Música Popular, que objetivou “reviver e preservar o nosso folclore, estudando-o através de pesquisas” em uma tentativa de manter as raízes culturais vivas entre o povo”, bem como “incentivar e vitalizar nossas festas populares” (MCP, 1963)

As ações do Movimento de Cultura Popular do Recife, desenvolvidas nos anos 60, construíram objetivos que estabeleceram a relação entre educação e cultura e a valorização de ambas, por meio da arte. A soma dos objetivos pretendidos por cada ação representou uma tentativa de alcançar seu compromisso com a elevação cultural da população e a diminuição da taxa do analfabetismo, propondo uma transformação social.

Considerações finais

Os documentos analisados evidenciam que o MCP construiu em seu bojo a valorização identitária dos sujeitos e o incentivo para o desenvolvimento da autonomia dos mesmos. Entendemos que o MCP traz um marco significativo para a Educação de Adultos, na medida em que buscava uma educação para transformação, sua extinção ocorre em um período crítico. A educação sob a ótica do MCP desenha novas possibilidades a serem refletidas, compreendendo que não existe um saber único e sim saberes múltiplos.

Retomando a pergunta inicial que deu origem a este estudo: *Quais as principais contribuições do Movimento de Cultura Popular para a Educação de Adultos do Recife no período de 1962 a 1964?* Temos a dizer que as ações do Movimento no Recife, nos anos 60, desenvolveram-se por meio de uma prática educativa, social, política e de valorização da cultura, uma proposta preocupada com a transformação das condições da população.



Buscou-se o desenvolvimento de um movimento educativo que partiu da realidade social e cultural da população, promovendo possibilidades para uma reflexão crítico-político e social. Compreendendo que a educação, assim como a cultura, representa um ato político, o Movimento propôs a construção de métodos que visavam o confronto do oprimido com as situações de opressão, mobilizando alternativas para uma possível superação.

Observamos que a abordagem das práticas desenvolvidas indicou uma ênfase na valorização cultural aliada à educação como mobilizadoras para uma possibilidade de uma construção do conhecimento pautado no diálogo e na troca de saberes sem hierarquização, compreendendo e valorizando a ecologia de saberes.

Desse modo, a resposta à nossa pergunta é de que a própria criação do MCP no Recife já apontava os indícios de sua contribuição ao criar 201 escolas que atenderam a 626 turmas. Representando para a época a construção de uma educação/diálogo com 19.646 educandos, entre crianças e adultos. O Movimento representou uma proposta de educação inovadora e fez de suas práticas uma construção para conscientização política e social por meio da relação educação, arte e cultura.

Mesmo situados uma sociedade que ainda segue uma lógica perspectiva homogeneizante, que busca uma reprodução de padrões, o MCP buscou romper com tal lógica ao materializar em seu projeto uma construção coletiva e assim desenvolveu, em sua prática educativa, por meio do diálogo com as diferenças, um caminho libertador.

Notas

¹Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. stefanitamires@hotmail.com

²Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. mariofariacarvalho@gmail.com

Referências bibliográficas

Bardin, Laurence. 2016. *Análise de Conteúdo*. 3. ed. São Paulo, Edições 70.

Barbosa, Leticia Rameh. 2009. *Movimento de Cultura Popular*. Recife, Linceu.

Bauer, Martin W. & Gaskell, George. 2015. *Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som: Um manual prático*. 13. ed. Petrópolis, RJ, Vozes.

Beisiegel, Celso Rui. 2013. O pensamento de Paulo Freire: suas implicações na Educação Superior Eduardo Santos e Manuel Tavares conversam com o professor Celso Rui Beisiegel. *Revista Lusófona de Educação*, v. 24, n. 24, ISSN 16-401X. Recuperado.



Brandão, C. R. & Fagundes, M. C. V. 2016. Cultura Popular e educação popular: expressões da proposta freireana para um sistema de educação. *Educar em Revista*, Curitiba, Brasil, n. 61, p. 89-106, jul./set.

Coelho, Germano. 2002. *Paulo Freire e o Movimento de Cultura Popular*. In: Rosas, p. (org.) educação e transformação social. Recife, Editora da UFPE, p. 31 –95.

Freire, Paulo. 2015. *Ação cultural para a liberdade e outros escritos*. 15. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra.

Freire, Paulo. 2002. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa*. 25. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra.

Movimento de Cultura Popular, *Estatuto*, Recife, MCP, datilografado. 1961. Recuperado em: <<http://forumeja.org.br/book/export/html/1710>>.

Movimento de Cultura Popular, *Plano de ação para 1963*, datilografado. 1963. Recuperado em: <<http://forumeja.org.br/book/export/html/1710>>.

Moll, Jaqueline (org). 2004. *Educação de Jovens e Adultos*. Porto Alegre, Mediação.

Nunes, João Arriscado. 2010. O resgate da epistemologia. En: Santos, Boaventura de Sousa; Meneses, Maria Paula (orgs). *Conhecimento Prudente para uma vida Decente*. São Paulo, Cortez.

Rosas, Paulo. 1986. *O Movimento de Cultura Popular MCP*. Nota do organizador do CD: depoimento de Paulo Rosas, publicado em, *Memorial do MCP*. Recife, Fundação de Cultura Cidade do Recife, p. 19 -36.

Teixeira, Wagner da Silva. *Educação em tempos de luta: história dos movimentos de Educação e Cultura Popular (1958-1964)*. 2008. Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro.



Hip hop causa e efeito: Intervindo na violência com arte

Leonardo Luiz da Silva Araujo

Resumo

Dentro de um contexto sociocultural, o *Hip Hop* é tido como uma das culturas populares mais fortes na juventude atual. Percebendo como este movimento trabalha na vida do jovem, instigamo-nos a pesquisar sobre como funciona este processo e porque, mesmo não sendo mais aquela cultura de resistência racial da década de 1970, continua sendo uma das culturas que mais incluem jovens em vulnerabilidade social. Buscamos saber o que estes jovens entendem por violência e como lidam com isso. Através destas informações iniciais, me faço a seguinte pergunta: Como a inclusão social dos jovens através do *Hip Hop* pode minimizar os danos causados pela violência na sociedade?

Esta pesquisa de caráter etnográfico foi realizada a partir dos eventos de *Hip Hop*, por meio da seleção de agentes que representam relevância no movimento do Espírito Santo, Brasil. Realizamos entrevistas em seus respectivos espaços de atuação e, ao final da nossa pesquisa, reunimos as informações e comparamos as semelhanças e diferenças dos relatos. Percebemos como a violência simbólica ganha uma carga muito maior na vida de todos os agentes e analisamos o que o *Hip Hop* faz na vida de cada indivíduo. Teórico-metodologicamente, os autores que nos orientam são Ginzburg, na perspectiva indiciária, Bourdieu, no que diz respeito nas discussões em torno do poder simbólico e da dominação masculina, Mauss, em seu estudo sobre a Dádiva e Foucault no que tange a biopolítica e poder.

Palavras chave

Hip Hop; Violência; Juventude; Arte.

O que é violência para o *hip hopper*?

Para o entendimento da violência nesta dissertação, vamos utilizar o conceito de poder de Michel Foucault, que vai ao encontro da própria descrição de violência dos entrevistados. O que cada um entende como violência pode ser algo extremamente relativo de uma pessoa para outra. Foi percebido que algumas vezes, esta definição muda a partir do momento em que uma pessoa passa a fazer parte do movimento e ter contato com outras ideias. Para as definições pré-*Hip Hop*, há um consenso de que a violência seria todo o tipo de agressão, com destaque para agressão física. Foi observado, porém que, depois de um certo tempo fazendo parte da cultura, esta



definição passa a ser mais simbólica. Meninas apontam um grande destaque para o machismo e os meninos destacam o racismo e preconceito social. Ambos velado.

A partir do entendimento de Foucault, podemos perceber o poder como um feixe de relações que vão além das opressões do Estado. Ele não nega a importância do Estado, mas ressalta que as relações de poder estão dissolvidas em todo o tecido social.

Trata-se (...) de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações (...) captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais, principalmente no ponto em que ultrapassando as regras de direito que o organizam e delimitam (...) Em outras palavras, captar o poder na extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício. (Foucault, 1979, p.182).

Tomando como parâmetro esta descentralização, podemos entender como opera a violência neste prisma para os agentes analisados. Vamos tomar como síntese deste conceito, a palavra “restrição”. De certa forma, todos relataram formas de violência que se encaixam em algum tipo de impedimento. O impedimento de estar realizando sentindo ou fazendo. A violência simbólica passou a tomar uma importância maior em relação à violência física no que diz respeito ao maior sofrimento dos integrantes. Há relatos de agressões, mas ainda assim, estas agressões têm raízes que vieram do caráter simbólico, o que é exemplo da violência doméstica, presenciada por quase todos os entrevistados. Solidão e desconexão com o mundo também é outro padrão observado. Muitos se sentiam incompletos, vazios ou perdidos por alguma razão individual. Voltando a Foucault, nós temos o Estado como reprodutor da opressão através do exercício do poder, mas temos também essa opressão sendo operada de diferentes frentes além do estado, o que ele vai chamar de rede de microfísica articulada ao Estado. Podemos observar esta violência em diferentes espaços, como ambiente familiar, escola, Igreja...

A violência, de certa forma, sempre esteve presente na vida dos agentes, manifestada de uma forma ou de outra. Mas nem todos tomavam ciência de o que era violência ou não. Chapola observa que hoje, inclusive, ele sofre mais do que antes. Mas este sofrimento veio de uma tomada de consciência de algo que ele sempre sofreu, mas que tinha como normatizado (A disciplina aprendida nas diferentes redes microfísicas nos faz entender e aceitar como normais certas práticas de opressão). Historicamente falando, o *Hip Hop* foi formado por sofrendores, excluídos e renegados. Este padrão continua até os dias atuais. Outros atuantes relatam que sempre perceberam que estavam imersos a uma forma de violência, e nada muda nos dias atuais.



Chapola destaca que observa em sua *crew* que quanto mais escuro, maior a restrição sofrida por eles. Quando estão todos juntos, todos são associados da mesma forma, mas quando separados, os tratamentos são diferentes para um e para outro. Entramos aqui na questão do colorismo, onde a tonalidade de pele e os fenótipos negroides serão determinantes para o tratamento que a pessoa receberá da sociedade. A restrição citada pelos agentes é vivida em todos os campos de convivência que eles frequentam. Chapola ainda relata um episódio em que ouviu a seguinte declaração de sua professora dentro da universidade: “Projéctinho de dança e coreografiazinha não leva aluno a lugar nenhum”. Discurso que reforça a diminuição do trabalho de Juliano, que, neste momento atua como educador social. A violência então surge de forma sutil, nunca rebatida ou problematizada. Esta violência só vai ser rebatida quando se toma o fortalecimento da cultura que você participa através da informação. Este grupo seria dos que estavam tranquilos no momento em que conheceram a cultura *Hip Hop*.

Há relatos nos meus estudos de tentativa de suicídio devido a sofrimento causado por ambiente familiar tóxico, Casos de rebeldia, alívio das dores através das drogas e resposta de violência com mais violência. Este grupo seria dos que não estavam tranquilos no momento em que conheceram a cultura *Hip Hop*.

Resiliência das “minas”

Algo incrivelmente presente no movimento e descrito principalmente pelas meninas é o machismo refletido dentro e fora do *Hip Hop*, que torna a permanência das mulheres algo muito mais difícil. Porém antes de discutirmos sobre o que é ser mulher no *Hip Hop*, é necessário entender a partir de que olhares podemos enxergar isto, e Judith Butler em *Problemas de Gênero: Feminismo e subversão de identidade* (2013) nos dá uma visão que responde algumas de nossas perguntas. Esta obra traz a problematização para várias categorias que englobam gênero e nos deixa à tona as categorias de mulheres, que Butler considerava insuficiente para as bandeiras feministas até então. Pelo fato de não haver um modelo de mulher universal, foi necessário pensar na enorme diversidade de mulheres. Haviam mulheres negras, brancas, ricas pobres, heterossexuais, homossexuais, transsexuais... E todas recebiam tratamentos diferentes na sociedade. A partir de *Problemas de Gênero*, passa-se a discutir outra oposição além do masculino e feminino. A heterossexualidade e a homossexualidade, no sentido que foi observado que há um privilégio da heterossexualidade sobre a homossexualidade na sociedade em geral, que é o que se denomina academicamente de heteronormatividade. Há um modelo de feminilidade adequado e masculinidade



adequado para que esta heteronormatividade funcione. Esta categorização heteronormativa assume caráter político quando, através da binaridade de gêneros, os indivíduos são direcionados ao seu lugar no mundo. Tudo o que foge à regra pré-estabelecida torna-se objeto, marginalizado, com dificuldade para a inserção no meio social. Estas dificuldades são as que enfrentam as mulheres no *Hip Hop*.

Outro sociólogo que trará uma discussão sobre o tema é Pierre Bourdieu em *A Dominação Masculina* (1998). Nesta obra, ele se questiona por que diante de situações inaceitáveis de violência nós não temos grandes revoluções? Em busca desta resposta, ele vai apontar que o domínio do homem sobre a mulher se dá na dimensão simbólica. A estrutura de pensamento é tão enraizada que a dominação masculina acaba criando esquemas inconscientes de percepção, visão e atuação. A relação entre homem e mulher é tida como normal, portanto, não contestada.

[...] visam a instaurar, em nome e em presença de toda a coletividade para tal mobilizada, uma separação sacralizante, não só como faz crer a noção de rito de passagem, entre os que já receberam a marca distintiva e os que ainda não a receberam, por serem ainda muito jovens, como também, e sobretudo, entre os que são socialmente dignos de recebê-la e as que delas estão definitivamente excluídas, isto é, as mulheres (Bourdieu, 2002, p.34)

O machismo, assim como em todos os ambientes sociais, também atua sobre o *Hip Hop*, partindo de dentro e de fora. Das forças exteriores, a desmotivação parte de família e da sociedade como um todo, atribuindo ao movimento um caráter masculino, “desfeminizando” as atuantes da cultura. Além disso, é percebido que nas adolescentes há uma cobrança em casa como tarefas domésticas. As batalhas de *Rap*, os encontros entre os grafiteiros e os treinos do *Break* acabam se tornando sinônimo de “vagabundagem”, visto que é um momento a menos que estas garotas passam em atividades que poderiam ajudar em casa, além de fugir da heteronormatividade esperada para uma moça recatada.

De dentro para fora, porém, a cobrança é ainda maior. Segundo as *B.Girls*, o comportamento dos *B.Boys* diante de meninas do movimento é hora desrespeitoso, hora intimidador, hora desmotivador. Foi percebido entre as meninas uma grande dificuldade de se enturmar com os rapazes justamente por conta disto. Como o *Hip Hop* é uma cultura popular nascida na sociedade, ele acabou trazendo consigo muitas características que a sociedade já tinha, como o machismo. As atitudes citadas pelas *B.Girls* que mais atuam como força desmotivadora são assédio, rumores sobre sua vida



íntima e discurso de diminuição de suas capacidades. “A sociedade já é machista, e isto que a gente observa no *Hip Hop* seria tão somente o reflexo do que a sociedade já nos dá”, relata Natalia durante a entrevista. As grafiteiras queixam-se principalmente da questão da diminuição das suas capacidades. Normalmente subestimadas tanto por quem está de dentro quanto quem está de fora.

Grafiteiros são aqueles que já são a princípio os mais expostos do movimento. É perigoso praticar esta arte, especialmente para mulheres, então eles procuram sempre sair em grupos. Pela razão da hegemonia masculina em quantidade nesta arte, mulheres acabam sempre entrando em *crews* com maioria masculina seguindo presas aos homens. Críca relata em entrevista no evento Formação e *Cypher* que observa em São Paulo homens tomando protagonismo no trabalho de suas parceiras quando há o caso de casais no *Graffiti*. Outras meninas, tanto no Fórum Social Mundial, quanto entrevistadas pessoalmente, relatam como grande força desmotivadora é de fato a desacreditação do seu trabalho. Ao depararem-se com uma mulher, é comum ouvirem frases como “Mas é você que vai fazer esta arte aqui? Vou passar aqui mais tarde pra ver se vai ficar bom mesmo...” A pressão em ter que provar o tempo inteiro que elas são tão capazes quanto os homens torna o trabalho psicologicamente mais exaustivo. É injusto ter que lidar com este tratamento visto que, quando é um homem que se propõe a fazer tal arte, ninguém duvida de que ele realmente o fará. Keka relata ainda que esta pressão que é imposta sobre ela seria mais desagradável e desmotivadora do que a preocupação de possíveis transtornos que ela passaria com a polícia. A polícia, na verdade, nem sequer foi colocada como um problema, e possivelmente não teria sido mencionada se eu não fizesse esta pergunta específica. Posso supor a partir disto que os outros problemas se tornam mais emergenciais e preocupantes.

DJs e MCs sofrem o mesmo no quesito desacreditação. Elas narram como é difícil ser levada a sério em um mercado hegemonicamente masculino. *MCs* presentes no FSM denunciam a segregação de gênero existente no rap com o termo “*Rap de mina*”. Segundo elas, organizadores dão menos crédito a atrações femininas. Frases do tipo são comuns em eventos: “Agora vem o *Rap de minaaí*, dá uma moral galera”, como se este “*Rap de mina*” como eles chamam fosse apenas um buraco a ser preenchido entre uma atração importante e outra, a cota. Mulheres relatam inclusive dificuldade para serem femininas no *HipHop*, pois este estereótipo é carregado de uma série de estigmas vistos como negativos dentro do meio. Há a movimentação para a formação de novas ideias, mas poucas pessoas se interessam. Acaba que comumente o discurso e a troca



de ideias das mulheres acontece entre elas mesmas, por isso elas continuam invisíveis e sem voz. Temos ainda outra questão no *Rap* que seria de ataque direto, como machismo em batalhas e o favoritismo para com os homens. MC Taz Mures relata “O *Hip Hop* é a cultura que mais dialoga com a periferia e outras culturas, mas as mulheres continuam base para que os homens cresçam”. Esta série de fatores pode responder, por exemplo, o motivo da escassez de mulheres atuantes na cultura. A Inicialização para elas, é tão difícil quanto a permanência, e é justamente neste ponto que amplia-se a solidariedade e sororidade entre elas.

[...]Como disse anteriormente, ainda temos muito espaço para batalhar no Hip Hop. O Machismo é gritante, oprime e subtrai produtividade das mulheres. Temos que nos reafirmar o tempo todo em nossas artes. Das B.Girls, que precisam invadir as rodas de dança para ter espaço, às grafiteiras que são excluídas ou recebem um pedaço de muro simbólico nos projetos mistos, às cantoras de Rap que são convidadas para fazer o refrão dos caras, e as DJs que... Bem... Onde estão as DJs? Nem são lembradas. Nós nos unimos e nos fortalecemos. Divulgamos e prestigiamos nossas “manas” para crescermos juntas e para nos fortalecer. Não precisamos de caridade, precisamos de respeito. (Femme, 2018)

Alguns críticos da obra de Bourdieu atacam as mulheres por apresentarem um comportamento subserviente condizente à dominação masculina. O mesmo para os homens do *Hip Hop*, ao dirigirem-se por muitas vezes, às mulheres do *Hip Hop*, culpando-as por não ocuparem o espaço que reivindicam. Porém tanto no ataque às obras de Bourdieu quanto no ataque às mulheres no *Hip Hop*, há também uma reprodução da dominação masculina. É importante pontuar que o Espírito Santo, estado onde foi realizado o estudo, está entre os cinco piores estados para ser mulher no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a partir de dados de 2015.

B.Girl Magrela, líder do *Conexão Flow*, é vista basicamente como uma mãe entre suas parceiras de *crew*. Foi observado o esforço para além das expectativas por parte dela para manter as meninas motivadas e presente. Um exemplo é que no dia da entrevista com sua *crew*, ela própria chegou atrasada, pois tinha ido de ônibus a outro município buscar uma integrante do grupo que não tinha passagem de ônibus naquele dia. Integrantes do grupo me afirmaram que ela faz isto com frequência. No mesmo dia ela ainda tirou do próprio bolso para comprar um lanche para as meninas, pois o ensaio atravessava o horário do almoço e, de lá, todas iriam direto para um evento. As atitudes de Magrela me mostram um esforço muito além do esperado para realizar o seu trabalho junto às suas parceiras. Observei entre elas (as integrantes da atual formação da *crew*)



uma grande rede de solidariedade da qual todas oferecem apoio umas às outras. O machismo institucionalizado, porém, faz com que elas próprias se critiquem em vários momentos na intenção de evitarem constrangimentos futuros.

Chapola destaca que, entre as suas alunas, ele precisou adotar uma postura diferenciada para proteger as garotas do assédio dos rapazes. Com suas próprias palavras, ele diz que ensina as meninas uma postura *underground*. Nesta postura, elas são “boladas”. Ser “bolada” é tomar uma postura hostil que emana seriedade e agressividade na sua presença. O motivo da postura *underground* é blindar as garotas para que elas evitem futuros assédios. Desta forma, os assediadores são intimidados, ao invés de o contrário.

No *Graffiti*, grupos de resistência feminina também surgiram como o “Coletivo das Mina” e no *Rap* as mulheres fortalecem-se através de *Cyphers* (abordarei especificamente sobre este conceito no próximo capítulo) femininas e fazendo-se presentes em formações para *MCs*. Durante o Fórum Social Mundial 2018 na mesa redonda “A Participação da Mulher no Hip Hop”, foi ouvido das mulheres atuantes do movimento o descontentamento delas perante algumas atitudes dos homens da cultura. No *Rap* é notada grande exclusão dos grupos femininos e um tratamento menos digno do que dado aos homens. Coisas refletidas no cachê e na representatividade por quantidade. As mulheres da mesa relatam que precisam unir-se e cobrar o respeito para que ele aconteça. Em comum acordo, foi observado porém que as batalhas de *Rap* tem tido uma evolução satisfatória no que diz respeito a diminuição dos preconceitos, como o machismo. A própria batalha tem se tornado um filtro bom para a eliminação de ideias tóxicas e a propagação de ideias construtivas, visto que quem aprova e desaprova a performance de um *MC* seria o próprio público. A participação das mulheres nas batalhas como artistas e como plateia tem contribuído grandemente para a mudança deste quadro.

Precisamos dos ambientes estritamente femininos justamente para fortalecer nossas ações, nossa produtividade, para dialogar sobre o sistema opressor e compartilhar vivências. É um preparatório para os ambientes mistos, que são muito importantes, mas majoritariamente masculinos. Quando saímos da nossa zona de sororidade confortável e caímos no ambiente dominado pelos homens, nos sentimos fortalecidas e melhor preparadas para conquistar ou compartilhar os espaços de fala. (Femme, 2018)



Do hip hop à emancipação

A partir da resposta que tivemos do entendimento do *Hip Hopper* acerca de o que seria violência, pudemos analisar qual foi a mudança que ocorreu na vida do agente a partir do momento em que entrou em contato com a cultura. De uma forma geral, todos os envolvidos tiveram a experiência da tomada de consciência e da auto aceitação.

Formas de violência das mais diversas foram constatadas, com ênfase em racismo, machismo e preconceito social. Aqueles que estão diretamente envolvidos na cultura *Hip Hop*, não necessariamente afirmam deixar de passar por tais violências ou relatam diminuição do sofrimento. Pelo contrário, Chapola afirma, como já citado, que, nos dias atuais, ele sofre mais. Tal como as mulheres entrevistadas, que se veem vítimas de machismo dentro e fora da cultura. O que muda efetivamente neste quadro é que hoje estes agentes conseguem enxergar as diversas formas de violência e se veem com mais força para combater as injustiças sociais que sofrem.

No que diz respeito à aceitação, o *Hip Hop* serviu como fonte de fortalecimento, emanando um amor próprio que antes não era estimulado. Relatos principalmente vindos da condição de “morar no beco” acabaram-se transformando de motivo de escárnio e zombaria para algo do que orgulhar-se. A favela é algo louvável dentro do *Hip Hop*, a ponto de haver inclusive uma inversão de valores sociais. Aquele integrante de tem origem da favela acaba por ter mais prestígio do que o integrante que tem origem em bairro nobre, pois estes exercem o Capital Subalterno, antes inexistente. A etnia negra também ganha uma força de fortalecimento e beleza, enaltecido principalmente pelas letras de *Rap*. O *Hip Hopper* alcança, portanto, em um olhar Bourdiano, o Capital Simbólico que lhe confere posição social elevada, em relação ao seu estado anterior.

Marciano Nizza ressalta em sua fala “Quem tem poder é o negro”, mostrando como o *Hip Hop* foi uma incrível ferramenta de protagonismo onde o negro pode se ver como inventor da sua própria história. Com “poder”, ele pode estar tanto se referindo a obtenção dos capitais como capacidade para causar impactos significativos na sociedade através dos artifícios que tem. O próprio Marciano descreve como encontrou no *Hip Hop* um lugar onde se sentiu aceito, quando antes, sofrera preconceito religioso na escola. O *Hip Hop*, por ser uma cultura formada por agentes de inúmeras culturas e mais de dez nacionalidades diferentes convivendo no mesmo ambiente, seria a cultura mais pluricultural, tolerante à entrada do novo e do diferente. Marciano inclusive foi um apelido pejorativo, vindo do estranhamento dos seus colegas de sala, que o chamavam de “Marciano Macumbeirinho” (Apelido dado por causa de seu pai, que era espírita). Ele



foi adotar o apelido depois que se aceitou por completo dentro da cultura (após passar pelo processo de ganho de capital simbólico). Isto fez com que o próprio desenvolvesse uma sede de informação para conhecer a história do *Hip Hop* e garantir que as pessoas ao seu redor também a conheçam, fazendo com isto, que não sejam ignorantes culturais.

Marciano destaca a importância do *Hip Hop* enquanto canalizador da violência urbana, citando histórias onde mais de cem gangues simplesmente decretaram trégua em prol da arte. Estes relatos podem ser compreendidos mais detalhadamente nos documentários “The Wars” e “*Rubble Kings*”. Mas ele destaca também que o *Hip Hop* não é uma cultura pacífica, é uma cultura de enfrentamento, pois se fosse pacífica estas gangues não teriam dado trégua. À luz desta informação, ele afirma utilizar o *Hip Hop* como uma poderosa arma de convencimento de que os conflitos sociais podem ser transformados em arte.

Laços de amizade acabam se tornando mais fortes quando os sujeitos envolvidos estão conectados por uma força solidária de ajuda mútua. É o caso dos coletivos femininos observados e especificamente os grafiteiros. Keka relata como conseguiu vencer a síndrome do Pânico através do *Graffiti*. O *Graffiti* é uma arte que te expõe, você é obrigado a estar exposto para praticá-lo. Na *crew* da Keka, *FG Crew*, foi percebida grande solidariedade entre os membros, mesmo sem as questões de gênero como visto na Conexão Flow. Os integrantes da *FG Crew* não permitiram que a Keka se entregasse ao medo e à depressão, insistindo sempre para que ela voltasse às ruas. Então, aos poucos, ela foi recuperando a confiança de socializar-se. Importante ressaltar que as comparações entre casais no *Graffiti* dando mais crédito ao homem não foram confirmadas entre Keka e Starley, o que mostra que a questão varia de indivíduo para indivíduo. É bem comum *Hip Hoppers* entenderem a própria *crew* como uma família, pois é observado uma dedicação e um cuidado entre os envolvidos para que os membros não caiam ou se percam. Problemas financeiros são característica comum entre os grafiteiros, visto que esta arte exige do artista um investimento. Então grafiteiros, de uma forma geral, usam redes de relacionamento para sobreviverem. Um ajuda o outro para que todos tenham condições de continuar, e com esta rede de ajuda mútua, a solidariedade aumenta.

Outro caso curioso foi de Bily Anderson, que sofre de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e apresenta muitas dificuldades cognitivas e motoras. Bily sofreu na sua vida inteira com a discriminação nos setores que participava, tanto pela



sociedade quanto pelas instituições que não tiveram preparo para lidar com o caso dele. O próprio alega que o tratamento das pessoas para com ele mudou a partir do momento em que ele descobriu o *Hip Hop* através do *Break* e, principalmente, mais tarde, o *Beatbox*. Ele encontrou pela primeira vez um local aonde as pessoas não o julgam pelo que ele é, mas por suas habilidades reais. Ele chama atenção no *Beatbox* e atualmente faz apresentações em escolas, apresentando a sua arte, falando um pouco do *Hip Hop* e da sua trajetória. É como se a arte lhe concedesse pela primeira vez a oportunidade de ser respeitado e tratado como um artista. Seu maior sonho é se tornar campeão mundial, para que, pelas palavras dele, que ninguém mais o despreze como ele é, e possa dar exemplos para outros com o mesmo transtorno.

Todos os entrevistados tiveram, de forma marcante, o contato com algum tipo de violência, porém não foi em todos que esta característica foi tão marcante em sua biografia, o que foi o caso de Afonso. Diferente da condição da vítima passiva, Afonso relata que se percebeu em momentos respondendo a violência com mais violência. A partir da sua participação no *Rap*, ele sentiu a necessidade de reverter este quadro para iniciar a mudança partindo dele. Como visto anteriormente, o *Rap* apresenta um filtro interno que ajuda a substituir ideias agressivas por conhecimento, mesmo nas batalhas de *Rap*. O fato de muitos atuantes do *Hip Hop* se envolverem com o projeto social, faz com que grande parte repense as suas atitudes perante a sociedade, pois, o que ele prega, precisa ser necessariamente condizente com o que ele faz. Artistas de uma forma geral são pessoas que influenciam outras e, quando você está inserido em um contexto como o *Hip Hop*, há cobrança e julgamento caso você tenha algum comportamento que seja considerado contra a cultura. Não importa se o artista é pequeno ou grande, se é observada publicamente atitude machista, homofóbica ou de qualquer preconceito, esta pessoa é cobrada. Afonso entende sua responsabilidade social para com todos aqueles que o seguem e procura influenciar jovens através de seus versos e atitudes. Uma frase de motivação vinda de um outro *MC* surgiu como um estalo na sua vida para que ele tivesse certeza do caminho que resolveu trilhar. A pessoa elogiava a sua conduta diferenciada dentre os outros *MCS*, que ainda passariam pelo processo de amadurecimento.

Todos os entrevistados, apesar de terem objetivos e histórias bem diferentes entre si, tem em comum três coisas. No passado a experiência dentro do preconceito simbólico velado pela normatização; no presente a solidariedade para com os seus parceiros próximos e um interesse em se fazer enaltecer e crescer o *Hip Hop* capixaba; e no futuro



um sonho de ver a sua arte multiplicada, se vendo a frente de uma iniciativa que forme novos *Hip Hoppers*.

Multiplicando a arte

“Coordenar e estar a frente de instituição que incentiva uma pessoa a ter uma autonomia forte”, é assim que descreve Chapola o que seria o seu sonho dentro do *Hip Hop*. Todos os outros entrevistados almejam coisas diferentes, mas nenhum deles foi muito longe desta ideia. As meninas do Conexão Flow falaram coisas como ter o próprio grupo de dança, coordenar um coletivo feminino, se tornarem professoras... Marciano tem a ambição de mudar a cabeça do *Hip Hop* capixaba e transmitir informação para o país inteiro, Aline Guerra quer expor para todos a sua visão de mundo, quer ser ouvida, Afonso almeja mostrar para todos que a periferia pode fazer circular o dinheiro entre ela e que o pobre é capaz de viver de uma arte que seja sua... Enfim, todos caminham para suas próprias direções, mas todos tem em comum uma coisa: A semente da multiplicação da arte. Inclusive eu (Rapman, como sou conhecido no contexto do *Hip Hop*) carrego esta semente nos meus objetivos pessoais, querendo apresentar a todos esta cultura e mostrar como, no *Hip Hop*, podemos encontrar uma alternativa de recuperação das “doenças” da sociedade e salvar vários jovens de periferia, como também me salvou. (uso a palavra “doença” em razão ao paralelo que se faz com o nome “*Hip Hop*”, que remete à cura, como dito no Capítulo I, mesmo entendendo que as ciências humanas consideram inadequadas analogias médicas para descrever a sociedade)

Assim como muitos outros, eu também me encaixo no contexto da violência simbólica velada, por questões da minha cor e origem. Dentro do *Hip Hop*, eu pude enxergar isto pela primeira vez e, depois de uma longa auto-reflexão e a experiência com esta entrevista, pude perceber que foi a primeira vez em que eu pude me aceitar negro pela totalidade. Assumindo meus cabelos, cultura, traços e história. Além da auto-aceitação, o *Hip Hop* me trouxe outra coisa, a oportunidade de ser protagonista da minha própria história (Tal como outros que também estavam perdidos antes de encontrarem o *hip Hop*, de fato, a maioria).

Hoje eu me encontro em uma posição que posso me considerar importante, influente. O *Hip Hop* me trouxe os três capitais descritos por Bourdieu: Capital Simbólico, econômico e cultural. E sei que tenho o poder de colocar outros jovens na mesma posição que eu, para que tenham também acesso a estes capitais, ao invés de eles procurarem pelos capitais em caminhos que consideramos inadequados. O projeto



social, além da oportunidade da aproximação e da conversa, fortalece o atendido através da técnica, que supre a necessidade de capital simbólico que ele almeja. A partir do momento em que a pessoa se torna artista, ele pode com as próprias pernas traçar a própria história e fazer o mesmo com o próximo, multiplicando a arte futuramente.

Com o resultado do início da minha pesquisa, eu busquei responder as perguntas colocadas nesta dissertação e devolver para as comunidades no formato de histórias em quadrinhos com “Rapman”, um super-herói vindo do gueto contextualizado na cultura *Hip Hop*. O objetivo de Rapman HQ é levar a informação de forma lúdica, para que o acesso ao conhecimento seja divertido e interessante para todos. O público alvo deste projeto seria crianças ou adolescentes da periferia que pudessem se identificar com os personagens e, através deles conhecerem a cultura *Hip Hop* e refletirem sobre as questões sociais que trago, como o racismo, violência policial, a transformação do ser humano através da arte e o próprio preconceito que a cultura sofre. A escolha de um super herói sem poderes como protagonista seria justamente para mostrar que o que dá poder ao indivíduo, é justamente a arte. Rapman é apenas um garoto comum, mas que, com o *Hip Hop*, consegue fazer grandes coisas.

Desde o lançamento da revista Rapman, eu busquei praticar o que estava propondo de dar visibilidade às pessoas que são negligenciadas, começando pelas mulheres do *Hip Hop*. Convidei o grupo Conexão *Flow* e Keka para participarem da festa com sua contribuição artística. Keka ficou responsável pela arte da capa da revista e contemplou o movimento com uma tela feita ao vivo. Já o Conexão *Flow* apresentou uma performance especial para o evento. Ambas as atrações foram pagas com o dinheiro do projeto que ganhei para lançar esta revista. A proporção de revistas que eu vendi foi exatamente a proporção de revistas que eu doe em projetos sociais dos quais escolhi para realizar uma ação, visto que o principal objetivo deste trabalho é levar às crianças o acesso a arte e apresentar a cultura *Hip Hop* como alternativa ao combate da violência.

Paralelo ao projeto Rapman HQ, lancei uma música intitulada “Artes Pra Quê?” em parceria com Jesselane Baldan que busca responder questões que a sociedade nos coloca, como qual o papel da arte e a quem ela serve. Através destes trabalhos, convido a todas as pessoas que me acompanham a pensarem comigo alternativas para escaparmos da escravidão social e, seguindo o pensamento dos Humildes Professores dos Cegos, acabar com a tirania dos 10%. No clipe Artes Pra Quê eu uso figuras de linguagem e recursos visuais para alcançar os sentidos do ouvinte que a academia não alcança pela inacessibilidade. Neste jogo de “bola e gandula” eu me torno a pessoa



intermediária e busco levar informação da periferia pra academia e da academia para a periferia.

Artes por quê? Por que tão difícil de responder? Alguns acham que é só para entreter... O que me faz dizer 'artes pra quê?' Crer? Ver? Artes pra quê? Um motivo para desenvolver Algo que para ti possa valer. Um artista em risco de padecer, ser ou não ser? Deixa eu fazer a minha parte, Porque a resiliência sempre foi nosso escudo. Se percebermos tudo acaba em arte, Porque a arte sempre cabe em tudo! Se souber capturar os sintomas, indícios, pistas Na sociedade, de verdade, tudo acaba em artes. Todos podem fazer arte, mas nem todos são artistas, pois as pistas se confundem e revelam várias verdades. E nessas verdades, colocadas num papel, surge a canalização pra vir a inspiração. Todos podem enxergar as mesmas estrelas no céu, Mas ninguém é capaz de ver a mesma constelação. Quanto mais de perto você olha, menos você vê. Minha arte não é feita em meia hora como você pensa. Anos de estudo e tanta coisa pra aprender numa eterna luta interna pra que o lobo bom vença! Somos pequeninos apenas grãos de areia, páginas escritas esperando alguém que leia a história da nossa aldeia Arte poesia que corre da nossa veia. Que entra no inconsciente e de repente meche com a gente de uma forma surreal porque a arte tem uma relação com o outro Impossível pela abstração intelectual. Na música, dança, no teatro, pintura, escultura, cinema, poesia, arquitetura a cultura abre sua mente e te convida a tomar as dianteiras e inventar a própria vida!

O prazer foi deixado de lado há muito tempo em prol de um gozo imediato que o sistema tem feito. É como se tu tivesses ejaculação precoce A cada masturbação e se desse por satisfeito. Mas não! Não quero meramente um gozo rápido no mundo da descartabilidade cultural, busco então prazer na escalada da montanha diferente de quem só visa o final! O prazer é uma viagem, o gozo é o consumismo, o sistema é uma miragem pra reforçar o capitalismo, entenda aqui nessa mensagem que o prazer fora esquecido e esse gozo que tu busca só vai te levar ao abismo! Arte que só diverte só te mantém inerte, é necessário divergir, causar angústia, provocar, problematizar, buscar equilíbrio nesse flerte, pois a arte oscila entre o agredir e o agradar! Agradar ou agredir, divergir ou concordar, acordar ou pressentir, construir ou derrubar. Só não pode reforçar papel de alienação e deixar o nosso povo se acomodar. Porque quando acomoda vira massa de manobra. Separam nosso povo deixando ele disperso. Te fazem apoiar o opressor. Use a sua arte pra fazer o caminho inverso! (Rapman e Baldan, 2018)

Após o lançamento do clipe Artes Pra Quê, eu lancei, em parceria com Peagá Salles o clipe Deixe a Arte em Paz, seguindo a mesma linha do primeiro, porém, desta vez, com uma pegada mais agressiva, caracterizando um *Rap* de protesto. Em Deixe a Arte em Paz, o que fazemos é uma denúncia contra a censura que a arte vem sofrendo nos



últimos anos. Deixei a Arte em Paz veio acompanhado de uma performance coreográfica, da qual eu paro a música e relembro o incêndio no Museu Nacional, que fez com que grande parte da nossa arte e história fosse destruída devido a negligência daqueles que estavam responsáveis pelo museu. Procuro deixar claro nesta música que o papel da arte nem sempre é diversão, como tinha dito na música anterior, “agredir ou agradar”. E para que o manifesto seja de fato ouvido, é necessário ser inconveniente colocando o dedo nas feridas. O papel do *Rap* é informar e denunciar, expondo muitas vezes o que a mídia não mostra, e é isto que fazemos.

Artisticamente falando, dentro da universidade, eu ganho mais destaque da mídia se eu dançar pelado, então eu vou tirar a minha roupa em todos os centros, pra ver se a mídia mostra o efeito do corte de gastos. Vocês são cães e gatos brigando sem razão enquanto os mesmos ratos lucram com a rupção (corrupção). Não vim aqui pra agradar ninguém e nem trazer diversão, eu vim pique Deidara, minha arte é uma explosão! (Rapman, 2018)

A guisa de conclusão

Podemos então, com as experiências relatadas nesta dissertação, passar a entender o nome *Hip Hop* (*HigherInfinite Power HealingOur People*) com exemplos reais para explicarmos o seu significado. O poder que estamos falando é o poder do fortalecimento e da tomada de consciência para com os problemas sociais existentes no mundo. Ele é infinito, pois o *Hip Hop* leva como característica fundamental a multiplicação da arte para o surgimento e a renovação constante de *Hip Hoppers*. Esta cura se dá a partir do momento em que os agentes tomam consciência das formas de violência que sofrem e ganham força através do fortalecimento e da solidariedade para não se calarem e combaterem as injustiças sociais. Cura neste contexto, apesar de não ser a palavra mais adequada, é a palavra equivalente à tradução e representa a resolução de um problema. E o povo atendido pela instituição *Hip Hop* é o povo menos favorecido socialmente, seja em gênero, origem, etnia ou demais minorias sociais.

Obviamente o *Hip Hop* não responde a todas as perguntas, por exemplo, a própria reprodução do machismo, falhando na sua primeira missão de inclusão. Mas mesmo com os problemas relatados pelas mulheres, nenhuma delas demonstrou desmotivação maior do que as forças que as motivam. A expressão como arte e o convívio social que o *Hip Hop* lhes proporcionou se mostraram como as principais força-motrices para a permanência das meninas. Elas gostam muito de fazer o que fazem, gostam de estar juntas e tem um objetivo firme sobre o que querem, enfrentando ou não os problemas que surgem. Mas com a solidariedade entre elas observada, os problemas se tornam



menos complicados de serem combatidos. É necessário que os próprios agentes do *Hip Hop* fiscalizem atitudes inadequadas dentro do movimento e denunciem ou reeduquem os militantes, como é o objetivo de iniciativas como Formação e *Cypher* e demais rodas de conversa e formações internas para trabalhar o movimento de dentro pra fora.

Voltando então à afirmação da professora universitária relatada por Chapola, “Projetinho de dança e coreografiazinha não leva aluno a lugar nenhum”, podemos combater esta fala com a própria experiência dos agentes observados. A maioria dos entrevistados da dança e do *Graffiti* vieram ao *Hip Hop* através de projetos com um professor à frente. Posso entender inclusive a experiência do Conexão *Flow* como um projeto social não remunerado, atuando diretamente na vida de cada uma. *MCs* e *DJs*, com inicialização diferente, é observado um padrão maior na aprendizagem vinda da rua, mas eles mesmos retornam seus trabalhos em projetos sociais. Alguns, como Afonso, iniciaram no projeto social através de outro elemento, e depois descobriram o *Rap*. Seja de uma forma ou de outra, portanto, todos se sentem representados e protagonistas dentro da área que atuam. Muito tem que ser evoluído dentro desta cultura, como muitos afirmam, mas o que ela já faz, já está muitos passos a frente das melhores iniciativas de políticas públicas do Estado.

Referências bibliográficas

Amaral, Elizabeth de Souza. Com licença Hip-Hop: Mapeamento dos grupos de Hip-Hop na grande Vitória, Espírito Santos. 2009. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal do Espírito Santo. 2009.

Borges, Carlos Nazareno Ferreira, Lopes, Simone Magalhães, Alves, Claudia Aleixo, Alves, Fábio Padilha. Resiliência: Uma Possibilidade de Adesão e Permanência na Prática do Futebol Feminino. Porto Alegre, v.12, n. 01, p. 105-131, janeiro/abril de 2006.

Bourdieu, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz, Lisboa, Difusão Editorial Ltda, 1989.

Bourdieu, Pierre. La Domination Masculine 2ª ED. Éditions du Seuil: Paris, 2002.

Bourdieu, Pierre. Será possível um ato desinteressado? In: Bourdieu, Pierre. Razões Práticas: sobre a teoria da ação. Tradução: Mariza Corrêa. Campinas, SP: Papyrus, 1996.

Bourdieu, Pierre. Marginalia. Algumas notas adicionais sobre o dom. Mana, v.2, n.2, 1996.

Butler, Judith. Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro, RJ: Editora Civilização Brasileira, 2003.



Caillé, A. O dom entre interesse e 'desinteressamento'. *Realis – Revista de Estudos Antiutilitaristas e Pós-coloniais*, v. 03, n.01, 2013.

Caillé, A. Nem holismo nem individualismo metodológicos. Marcel Mauss e o paradigma da dádiva. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 13, n.38.

Foucault, Michel. *A arqueologia do saber*. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

Foucault, Michel. *Microfísica do poder*. 17ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2001.

Freyre, Gilberto. *Casa Grande & Senzala*. São Paulo: Global Editora, 1933.

Ginzburg, Carlo. O fio e os Rastros: Verdadeiro, Falso, fictício. *Il Filo e Le Tracce: vero falso finto*. 2006. Tradução de Rosa Freire d'Aguiar e Eduardo Brandão, São Paulo.

Godbout, J.T. Introdução à dádiva. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v.

Haraway, Donna. Tentacular Thinking – Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene. *New York: E-flux Journal #75*, 2016.

13, n.38.

Ingold, Tim. *Estar Vivo – Ensaio sobre movimento, conhecimento e descrição*. 1948.

Tradução de Fábio Creder. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. Coleção Antropológica

Marcellino, Nelson Carvalho. *Pedagogia da animação*. São Paulo: Papyrus, 1990.

Mauss, Marcel. *Ensaio sobre a dádiva*. *Essai Sur le Don: Forme et Raison de L'échange dans les sociétés archaïques*, Paris, 1925.

Ness, Alien. *The Art Of Battle*. New York, 2009.

Nogueira, Oracy. *Racismo de Origem e Racismo de marca*

Rodrigues, Márcia Barros Ferreira. *Vida Moderna: Sensações, espetáculo, mercado, cultura e violências*. 2013. *Revista Simbiótica – UFES*.

Rodrigues, Márcia Barros Ferreira. *Razão e Sensibilidade: Reflexões em torno do Paradigma Indiciário*. 2005. Artigo publicado em *Dimensões* nº 17, 213-221 pp.

Rodrigues, Marcia Barros Ferreira. *Consumo e Violência: o fetiche no jogo de dominação da juventude*. Curitiba: Juruá, 2010.

Resende, Paulo Edgar R. e ROSA, Pablo Ornelas. *Ativismo Identitário e o Capital Subalterno*. 2017. Dissertação

Santos, Boaventura de Souza. *Cartografia Simbólica das Representações Sociais: Prolegómenos a uma concepção pós-moderna do direito*. Coimbra. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 1988.

Silva, Tainan Maria Guimarães Silva e. *O Colorismo e suas Bases Históricas Discriminatórias*. 2017. Artigo



Simmons, Russel. *Life and Def: Sex, Drugs, Money, and God*, New York, Three Rivers Press, 2001.

2º Congresso Brasileiro de Psicanálise disponível em: <<https://bit.ly/3hLgiKu>>. Acessado no dia 29 de outubro de 2017.

KRS-One - Out For Fame disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=pNaQFEy0exl> acessado no dia 29 de outubro de 2017.

KRS One sobre o Movimento Hip Hop, Ativismo, Feminismo, Política, etc disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=l5Wq9X3qjtc> acessado no dia 29 de outubro de 2017.

KRS-One Sobre Illuminati, Maçonaria e Hip-Hop disponível em: <<https://bit.ly/3nkdlr>>. Acessado no dia 29 de outubro de 2017.

Style Wars disponível em: <<https://bit.ly/395ymLr>>. Acessado no dia 29 de outubro de 2017.

Martha Cooper - Interview Part 1 and Part 2 (HipHop Files, Street Play) disponível em: <<https://bit.ly/2JQ9sqM>> e <<https://bit.ly/3s02JLW>>. Acessado no dia 29 de outubro de 2017.

Martha Cooper: Name Tagging disponível em: <<https://bit.ly/35dsCyp>> .Acessado no dia 29 de outubro de 2017.

Apocalyptodisponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=6ZXSXsjiT8>>. Acessado no dia 29 de outubro de 2017.

The Freshest Kids disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rmf-WuKy_Po>. Acessado no dia 29 de outubro de 2017.

Documentario SCRATCH disponível em: <<https://bit.ly/3rVP6NW>>. Acessado no dia 29 de outubro de 2017.

Warriors, Selvagens da Noite disponível em: <<https://bit.ly/2XeyanW>> e também na Netflix acessado no dia 29 de outubro de 2017.

Rubble Kings disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=VIWI8gO6V5E>> e também na Netflix acessado no dia 29 de outubro de 2017.

Rap é o gênero mais ouvido do mundo disponível em: <<https://bit.ly/3oimgFt>>. Acessado no dia 29 de dezembro de 2018

Os piores estados para ser mulher no Brasil disponível em: <<https://bit.ly/392UZ3o>>. Acessado no dia 29 de dezembro de 2018

Côrtes, Gerson Rodrigues. *Mandamentos Black. Gerson King Combo Volume II*. Polydor. 1978.



Os coletivos de Sarau: Novas formas de ação coletiva e novas agendas

Rachel de Castro Almeida¹
Adriana Maria Brandão Penzim²
Rodrigo Costa Silva Matos³

Resumo

Este artigo apresenta algumas discussões sobre a presença frequente, na atualidade, dos coletivos de jovens da periferia ocupando os espaços públicos das grandes cidades brasileiras, especialmente após as "Jornadas de junho de 2013". Em Belo Horizonte, evidencia-se um movimento crescente, promovido, em geral, por coletivos artísticos, especialmente os coletivos de Sarau, que revela novas formas de sociabilidade, potencializa o espaço público como o território de composição das novas situações públicas e como local de expressão das lutas emancipatórias das minorias, principalmente desses jovens das periferias. O lugar social e simbólico ocupado pelas periferias e pelos atores sociais individuais e coletivos foi ressignificado diante de um conjunto de transformações sociais e, conseqüentemente, produzem novas esferas públicas e novos modos de expressão das lutas emancipatórias. Como formas e estratégias de organização desses coletivos, suas formas de ação coletiva e suas agendas tornam-se fontes instigantes para esta pesquisa, pois resultam em um novo modo de ação política. A etnografia realizada, ao longo dos últimos dois anos, busca apreender os padrões de comportamento, as estratégias de organização de grupos e subgrupos, as redes de relacionamentos e as redes de significados, bem como os sistemas de trocas de materiais e simbólicas. Em linhas gerais, esses coletivos revelam expressões de resistências cotidianas, manifestadas nas poesias, nas expressões corporais, no modo de organização e comunicação das atividades.

Palavras chave

Coletivos artísticos; Sarau; Lutas urbanas.

Este artigo é fruto de uma pesquisa realizada ao longo dos dois últimos anos, em espaços públicos na cidade de Belo Horizonte, seguindo os rastros de novos coletivos, organizados em torno de práticas artísticas e de lazer, analisando as formas de uso e de ocupação de espaços públicos.⁴

A presença de coletivos de jovens de periferia ocupando os espaços públicos das grandes cidades brasileiras, especialmente após as "Jornadas de Junho de 2013",



sublinha a importância de se compreender o papel da dimensão espacial nas novas formas de associativismo civil, pois segundo algumas análises recentes essas práticas anunciam formas de enfrentamento da crise ligada ao chamado neoliberalismo (Harvey, 2014; Caldeira, 2013; George & Rizek, 2016; Scalon, 2014; Brenner, Marcuse, Mayer, 2018, Maricato, 2013,).

Tais coletivos tornam-se fontes instigantes de pesquisa por resultar em um novo modo de agir político, indispensável ao exercício da democracia (Gohn, 2013; Frugoli Jr. 2018; Fillieule & Tartakowsky, 2015), e por recolocar em cena importantes e históricos objetos de pesquisa, a saber: a juventude (Mannheim, 1968; Pais, 1990; Pais, 1993; PAIS, Cairns & Pappámikanil, 2005, Gohn, 2018), o espaço público (Simmel,

2005 [1903]; Sennett, 1988; Joseph, 1999, Fortuna, 2002; Low, 2015; Low & Smith, 2006, Frugoli, 2007, Salcedo Hanse, 2002), e o direito à cidade (Lefebvre, 1999; Lefebvre, 1980, Mitchell, 2003).

Este estudo, portanto, pretende se destacar pela relevância teórica e metodológica de enfrentamento dos desafios colocados, pois “é sempre arriscado interpretar processos emergentes. No mínimo, corremos o risco de seguir caminhos secundários ou, pior ainda, enquadrar novos eventos com o vocabulário disponibilizado por modelos interpretativos antigos, usando exatamente aqueles modelos que os novos eventos estão tentando deslocar” (Caldeira, 2013, sp, tradução nossa)⁵.

Nos rastros da resistência poética

A região metropolitana de Belo Horizonte conta atualmente com uma população em torno de 5,5 milhões de pessoas, sendo que 450 mil pessoas moram em favelas e há mais de 200 áreas de ocupação irregular (Libânio, 2018). A cidade planejada sob inspirações hausmanianas já nasceu elitista, excludente e com fortes clivagens socioespaciais. Tal como as demais grandes cidades brasileiras, a produção do espaço urbano da cidade de Belo Horizonte em linhas gerais se delineia configurando dois momentos históricos.

O primeiro, entre as décadas de 1950 e 1980, é descrito pelas marcas trazidas pela industrialização e a configuração das periferias precárias ou das nomeadas “urbanizações periféricas” (Caldeira, 2015). Esses são espaços caracterizados pela autoconstrução das moradias, sem legalização das obras, pela precariedade de infraestruturas e serviços, pelas instabilidades das condições de posse dos terrenos, pela presença distorcida do Estado, cujas práticas se consubstanciam em lógicas



clientelistas e por vários processos de estigmatização e discriminação. Diante dessa realidade é que nas décadas de 1970 e 1980, período marcado pela transição da ditadura militar, emergem os movimentos sociais e as organizações de base, apoiados pelos setores progressistas da Igreja Católica, promovendo nas periferias a nomeada «cidadania insurgente» (Holston, 2013), com forte participação feminina, pois as mulheres assumiram expressivo protagonismo nas lutas associadas à moradia e às condições de infraestrutura urbana.

O segundo momento, a partir da década de 1990, exhibe as forças da reestruturação produtiva e seus rebatimentos em termos sociais e espaciais (Costa & Mendonça, 2012; Mendonça, Andrade & Diniz, 2015; Ribeiro & Santos Jr. 2005; Torres &

Marque, 2004). Ao mesmo tempo em que há a criação de uma série de políticas públicas e práticas democráticas e participativas de gestão nas esferas de governo federal, estadual e municipal, nota-se o arrefecimento dos movimentos sociais urbanos. Neste período temos o crescimento da atuação das Organizações Não Governamentais nas periferias atuando na formação de sujeitos mais críticos, criativos e construindo novos espaços de participação e reivindicação. Além disso, segundo D'Andrea (2013), o entrecruzar de três campos discursivos – o acadêmico, os coletivos artísticos da periferia e a indústria do entretenimento – produz um alargamento do sentido de periferia, que já não passa a ser definido somente pelo binômio pobreza e violência, mas também pelos elementos cultura e potência.

Com efeito, no bojo dessas articulações, a Internacional das Periferias realiza, em 2017, o primeiro Seminário Internacional, na Maré, no Rio de Janeiro, cujo documento final evidencia esse sentido, como pode ser observado no seguinte trecho:

“[as periferias] devem ser reconhecidas pelo conjunto de práticas cotidianas que materializam uma organização genuína do tecido social com suas potências inventivas, formas diferenciadas de ocupação do espaço e arranjos comunicativos contra-hegemônicos e próprios de cada território”. (Carta da Maré, 2017).

Esse processo é também vivenciado na cidade marcada por um belo horizonte, muitas vezes invisível por aqueles que estão sujeito às situações e condições periféricas. A partir de meados dos anos 2000, a produção cultural das favelas da região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) começa a ser mapeada e nota-se a presença, segundo Libânio (2018), de uma «rede invisível de cultura» ainda pouco conhecida pela população e pela gestão municipal ou estadual. Os dados de 2003 indicam 7 mil



peças participando de 740 grupos culturais, incluindo artistas profissionais e em formaço. Em sntese, a maior parte dessas iniciativas so livres, sem apoio institucional, sem financiamento. Em termos de infraestrutura, em 53% das favelas no h qualquer equipamento cultural e, nas demais,  possvel encontrar 145 lugares para as prticas culturais, como bibliotecas, centros comunitrios, centros culturais e espaços adaptados.

Tal mapeamento foi importante no so para a identificaço dessas prticas, mas para que os participantes, promotores, agentes e mesmo toda a populaço residente naquela rea começasse a se (re)conhecer interna e externamente, o que promoveu, conseqüentemente, um fortalecimento de uma rede que amplificou as vozes da comunidade. Tal como enfatiza Libnio (2018), os moradores da periferia, cansados de esperar por mudanças, encontram novas (e prprias) formas de responder s mudanças impostas pela nova realidade, por meio de formas no convencionais de ao e de participaço, navegando entre resistncia e resilincia, usando a cultura como uma arena de construço de espaços de luta por direitos.

Nesse sentido, j so vrios os exemplos do lugar da periferia na RMBH como expresso da potncia, e algumas dessas iniciativas começam a ser objetos de estudos acadmicos-cientficos, a saber: o hip hop em Ribeiro das Neves (Costa & Silva, 2018), o Duelo de MCs, no Viaduto Santa Teresa, em Belo Horizonte, (Campos, 2016), as atividades culturais realizadas no Centro de Artes e Esportes Unificados, em Vespasiano (Reis, 2018), o atlas dos saraus da RMBH (Felix, 2018), o trabalho do artista plstico Pel (Fonseca, 2016).

 neste contexto efervescente que emergem os coletivos de Sarau tendo como referncia e marco importante a Cooperativa Cultural da Periferia (Cooperifa), fundada em 2001, em So Paulo, por Srgio Vaz.

Essa experincia foi uma fonte de inspiraço para que sete anos depois, em 2008, em Belo Horizonte, um grupo de jovens de uma regio perifrica, associada ao operariado, denominada Barreiro, criasse o Coletivoz, sob a liderança de Rogrio Coelho e Eduardo DW. Esse coletivo se tornou o centro de uma rede conformada hoje por vrios outros grupos em toda a regio metropolitana de Belo Horizonte, o que  recorrentemente valorizado entre os participantes, como releva o depoimento de Zi Reis, do Sarau Viralata:



“O sarau Coletivoz era meio um sarau que a gente frequentava que a gente se trombava, eu, Kadu, a galera do rolé da cidade, assim, que curtia essa coisa da poesia e da palavra. Essa coisa da proposta do sarau marginal, acho que o Coletivoz é muito referência para todo mundo aqui na cidade” (Reis, apud Felix, 2016, p.34)

Naquele mesmo ano, em Belo Horizonte, surgem movimentos de ocupação do espaço público na região central, como a Praia da Estação, realizado na Praça da Estação, e apresentações e duelos de rap, no viaduto Santa Tereza. Em 2011 já se nota um efetivo fervilhar de iniciativas esparsas de saraus, com o Vira-lata, em 2012, o Entre letras e retalhos (ELER), o Cabeça Ativa e o Apoema, em 2013, o Sarau Comum em 2014. Entre 2013 e 2016, foram criados outros doze novos coletivos de Sarau.

Em um rico universo de campo de pesquisa, o Sarau Comum se destaca dentre os demais por ser realizado em um bairro da região Centro-Sul da cidade de Belo Horizonte e pelo fato de manter regularidade mensal de encontros. O Coletivoz, apesar de ser o precursor, não se reuniu com regularidade ao longo dos anos de 2017 e 2018, o que impossibilitou a realização da pesquisa de campo. Mas, sua primeira coletânea agrupa textos de poetas que são uma referência para todo o conjunto de jovens ativos participantes das práticas de sarau na região metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, muitos desses autores são participantes eventuais do Sarau Comum.

O Sarau Comum começou a ser realizado em 2014, mas sua história tem início em outubro de 2013, quando um grupo de artistas decide ocupar um antigo casarão, propriedade do poder público estadual, que acumulava cerca de vinte anos de abandono. Depois de muita luta, com o apoio da comunidade, o governo estadual formalizou, em 2013, a cessão do casarão para que o coletivo pudesse se encarregar da gestão daquele espaço de uso público por 20 anos.

Atualmente, o Sarau Comum acontece a cada última sexta-feira do mês. Com as portas do casarão abertas às 19h a todos os interessados, o Sarau começa com a concepção do espaço, por meio da organização do seu pátio interno: um espaço amplo, livre, descoberto, com piso de cimento e algumas árvores de baixo porte. Este processo produz um espaço que é percebido pelos membros ativos e pela plateia como um ambiente bastante acolhedor, intimista, que gera uma sensação de familiaridade e de privacidade.

Para a realização do Sarau há uma composição espacial de mobiliários, produzidos com materiais reciclados, configurando uma apropriação em roda, ou um semicírculo ou,



eventualmente, um quadrado, sempre criando um vazio central, para acolher as performances. Há sempre a distinção de um espaço nomeado “Biblioteca Comum”, onde estão dispostos livros para consulta durante o evento por aqueles que quiserem escolher uma poesia e recitar.

A iluminação é bastante singela, em geral, a lua é a principal fonte de luz, somada a alguns recipientes de material reciclado, utilizados como castiçais com velas, dispersos no próprio piso, e uma ou outra luminária na parede do casarão ou no muro. A informalidade e a constante alteração na organização desse ambiente estão presentes em muitos outros detalhes ornamentais.



Fonte: <https://www.facebook.com/saraucomum/photos/rpp.652463061466126/1999245876787831/?ttype=3&theater> 26.10.2018

Nota-se, portanto, que a lógica de organização do espaço é bastante flexível, livre, criativa, sem marcas fixas ou uso de investimento material como estratégia de ocupação. Tais práticas corroboram a intenção original do coletivo, revelada no depoimento de Priscila Musa concedido ao Ministério da Cidadania:

(...) como a história do casarão que ocupamos, existem muitas memórias sendo esquecidas e arruinadas em outros velhos casarões em vários cantos da cidade, do estado, do país, algumas duras, outras de muita alegria, como a nossa um dia será. A restauração do velho casarão não é o que se realiza com a recomposição das trincas e fissuras, mas com outros corpos ocupando aquele espaço: os sons, os rastros, os cheiros, os rebolados. (Brasil, 2017).

Assim, a cada sarau são os corpos e os modos de apropriação que expressam uma construção de espaço público como espaço de deliberação conjunta e capaz de engendrar um destino comum para o próprio coletivo. Este ritual de organização do espaço é bastante simbólico e constituinte da organização do próprio coletivo.



O público do Sarau Comum é formado na maioria das vezes por cerca de 15 a 20 membros mais assíduos e entre 10 a 15 pessoas que circulam pelo local, mas não participam todo o tempo e não se manifestam. São jovens e adultos na faixa etária entre 15 e 35 anos, muitos universitários, alguns casais, hetero e homossexuais, muitos negros e negras, a grande maioria moradora em bairros periféricos de cidades que integram a região metropolitana.

No início de todo sarau são anunciadas as regras e entoa-se um grito de guerra na forma de canto. Essa abertura do início das performances é conduzida por um jovem, um dos pioneiros integrantes do coletivo. Ele exerce uma função equivalente à de mestre de cerimônias e, ao mesmo tempo, de mediador. Após apresentar as regras, ele próprio puxa o grito de guerra que consiste em uma interação entre uma primeira pessoa que grita “Sarau!” e as outras pessoas respondem “Comum”, assim sucessivamente. Desse modo é possível compreender o ritual de abertura como um momento em que se expressa a relação de cooperação entre o coletivo e a plateia. Essa prática revela que todos ali presentes fazem parte do espetáculo e não há separação entre coletivo e plateia: juntos, são todos o público.

Quando é aberto o microfone, a plateia ainda não assimilou a sensação de pertencimento e se comporta de maneira tímida, todas as pessoas permanecem sentadas, evitando, assim, ser a primeira, na expectativa de que outra o faça. Em todas as edições observadas do sarau foi possível notar que são os membros do próprio coletivo que abrem as atividades, dando início à recitação, e assim que esse momento de maior tensão é ultrapassado, alguém da plateia ganha coragem e recita.

As performances são bastante variadas. Os membros mais assíduos coordenam, participam mais ativamente e nitidamente dão o tom do evento. São eles que, além de apresentarem, incentivam seus pares a participar, convidando-se uns aos outros. Em geral, o orador que tem mais prática levanta, recita de cor, sem apoio de texto. Em ágeis gestos e movimentos, ocupa todo o espaço do palco e se aproxima da plateia. Há, contudo, aqueles que não se levantam para recitar ou que adotam um tom de voz bem baixo. Outros chegam a usar alguns artifícios para se proteger da própria timidez, como, por exemplo, bonés que cobrem parcialmente seus rostos. Há jovens mães, que vêm acompanhadas de seus bebês de colo, e que eventualmente recitam assentadas.

Dentro do grupo há quem goste de avisar, de maneira informal e irreverente, que o sarau está chegando ao fim, para que os presentes possam ir se preparando para o encerramento, mas há quem não goste dessa atitude, alegando que isso tolhe a



espontaneidade característica do sarau. Há aqueles que declaram o quanto gostariam que o encontro durasse a noite toda, e são esses mesmos que costumam prolongar a noitada ao sair do Sarau, indo, em geral, ao “Samba da meia noite”, no bairro Santa Tereza, ou para os bares da Rua Sapucaí.

O encontro e o reencontro são estratégias para reunir experiências pessoais e coletivas configurando uma coletânea “que carrega o sonar de vozes transhistóricas, composições que se complementam” (Bassi, 2018, p.8). O prefácio do *À Luta, À Voz: Coletivo Sarau de Periferia* já anuncia as marcas expressivas dessa forma de ação coletiva que entrelaça arte, cultura e política. Com efeito, “a literatura contida neste livro é um lugar de encontro, é como sempre diz um amigo meu, a celebração da palavra” (BASSI, 2018, p.8). Os membros do Coletivo manifestam que nestes encontros, lá pertinho da serra do rola moça, bairro Independência, Barreiro, é construída coletivamente uma esfera pública, na medida em que “um sarau [vai] firmando pactos, públicos do bar, passantes periféricos, chegados do trabalho, artistas, MC’s, pessoas” (Coelho, 2018, p.7).

Tal como aponta Lefebvre, o espaço é considerado um campo de possibilidades de construção de um espaço diferencial, em que o espaço contém e está contido nas relações sociais. “Logo, o real é historicamente construído tendo como representação mental o urbano e a cidade como expressão material desta representação.” (Souza, 2009, p.4-5).

As formas de compreensão do lugar social e do lugar de classe configuram modos de expressão muito potentes, tal como anunciado por Bassi: “Sua zona eleitoral era a de conforto.” (Bassi, 2018, p. 96, poema Eleições).

A zona eleitoral evidencia o modo como a relação de dominação é sustentada pela desigualdade de recursos disponíveis para os distintos grupos sociais. Na estrutura urbana, a estrutura de poder é expressa na capacidade diferenciada dos grupos e classes de desencadear ações que lhes permitam disputar recursos urbanos como infraestrutura, saneamento, transporte, serviços e habitação. Com efeito, é fato que essa distribuição desigual de recursos configura também uma repartição díspar do próprio poder. A zona eleitoral revela a correlação entre a espacialidade e a distribuição desigual de acesso aos recursos e às formas de representação política.



O lugar da representação e da expressão é construído pelos coletivos, objetos deste estudo, nas rodas de sarau, que aos poucos vão ocupando os espaços públicos e configurando seus territórios:

*“A sede do meu clube é na esquina,
Não cantamos versos floreados,
Gritamos com bafo de aspirina, Nossos
sonhos escarrados,
Pela boca com brilho de menta,
Mas, que sangra e fede, Quando,
sem piedade, mete, Palavras sujas
em minha vida.
A sede do meu clube de esquina,
Não é de água, é de cem coisas diversas, Destruída
por forças mais cruéis que o Katrina, Tão distantes
que parecem perversas,
Essa é a minha sede, a sede das outras protagonistas, De
notas de rodapé em jornais sensacionalistas
Notas manchadas com nosso sangue quente,
Escritos pelos falcões que comem a gente.
A sede do meu clube é na esquina, Mas,
quando chove é uma desgraça, As ruas
ficam vazias, nenhum vira-lata,
Nenhuma alma penada, frio e mais nada,
Dentro do meu barraco só traça,
Engulo a raiva, engasgo. Respiro. Mais aspirinas, A
sede aperta, a fome esmaga,
E as ruas vazias são feias. Assassinas” (FLOR, 2018,*



p.60, poema Clube da Esquina).

Em geral, de modo dialético, as expressões dos jovens, que são ativos participantes dos Saraus, revelam que todo espaço é previamente concebido e produz uma percepção sensorial (visão, audição, olfato, tato e paladar), que constitui um componente integral de toda prática social que se dá a partir da experiência, do espaço vivido (Lefebvre, 1980).

Um espaço em que a concepção é dada pela omissão do poder público e pelas concretas (im)possibilidades materiais. O espaço precário em termos de infraestrutura que lida com problemas ambientais e uma vida, que resulta desta condição, expressa por termos como “forças cruéis”, “desgraça”, “vazio”, “frio”, “raiva”, “sede”, “fome”. Entretanto, de modo ambivalente, é também uma representação que alude à potência simbólica do Clube da Esquina, um movimento musical brasileiro, surgido na década de 1960, em Belo Horizonte, que reunia jovens músicos que aos poucos ganharam reconhecimento e influenciaram diversos outros jovens artistas.

Assim, o espaço vivido descortina uma realidade em que é possível observar as afirmações da ausência ou mesmo da presença discricionária da justiça e da polícia, de organização das esferas políticas e religiosas e da própria lógica capitalista. Ao mesmo tempo, de modo ambivalente, vão sendo configuradas contra narrativas que expressam potência, resistência e sonhos.

“A preta que não tinha vez

Tá aí, cheia de voz.

A ancestralidade tomou conta

Agora ela só canta

E não mais se esconde em cantos. Sem

farsas

A preta é só força.”

(Bassi, 2018, p.96, poema Ubuntu).

Temos um poeta moldado por uma realidade socioespacial e que exprime a relação dialética entre as oportunidades e condições objetivas e expectativas subjetivas. Pois, é nesse contexto que encontramos “esse porvir de poetas que sobem e descem a



ladeira num busão lotado de nove-as-nove, que poetiza sonhos, amores e utopias” (Bassi, 2018, p.8).

É seguindo os rastros desses poetas e de suas práticas de sociabilidade urbana, que percebemos o modo como a cidade evidencia “as marginalizações, exclusões e injustiças (seja de classe, etnia, raça, gênero, sexualidade, nacionalidade ou outras) inscritas, naturalizadas e também contestadas dentro de configurações urbanas existentes por meio de práticas e ideologias espaciais” (Brenner, Marcuse e Mayer, 2018, p.46),

Breves notas conclusivas

Em síntese, os saraus revelam que a desigualdade socioespacial bem como as expressões de resistências cotidianas estão manifestas nas poesias, nas expressões corporais, no modo de organização e de comunicação das atividades e no uso das tecnologias, possibilitando a elaboração de identidades coletivas que se organizam em rede e ultrapassam as barreiras territoriais. O uso e a apropriação dos espaços públicos por grupos de jovens de periferia para a criação cultural, artística e política recolocam a discussão do direito à cidade ampliando os marcos interpretativos para uma escala transnacional (Hou & Knierbein, 2017; Knierbein & Viderman, 2018).

Notas

¹rachel.castro.almeida@gmail.com.br

²apenzim@uol.com.br

³rodrigomatosarquitetura@hotmail.com

⁴ Projeto de Pesquisa “Modos de vida na sociedade contemporânea: em busca da paz” e contemplado com o financiamento do Fundo de Incentivo à Pesquisa – FIP/PUC Minas/2018. As análises até o momento realizadas foram publicadas em vários congressos nacionais – 42º Encontro Anual da Anpocs (ALMEIDA & PENZIM, 2018), XVIII ENANPUR (ALMEIDA & MATOS, 2019) e 19º Congresso Brasileiro de Sociologia (ALMEIDA, 2019) e no XIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais (ALMEIDA & PENZIM, 2018).

⁵ It is always risky to interpret emerging processes. Minimally, we risk following secondary paths or, even worst, framing new events with the vocabulary made available by old interpretative models, exactly the ones that the new events are trying to displace.



Referências Bibliográficas

- Almeida, Rachel de Castro. Novos coletivos no espaço público: o papel da dimensão espacial na configuração de novas formas de associativismo civil dos jovens contemporâneos. In: 19º Congresso Brasileiro de Sociologia, 2019, Florianópolis, SC. Anais [...]. SBS, 2019.
- Almeida, Rachel de Castro; Matos, Rodrigo Costa Silva. Coletivos de sarau em Belo Horizonte: expressões das desigualdades socioespaciais. In: XVIII Encontro Anual da Anpur, 2019, Natal, RN. Anais [...]. Enanpur, 2019.
- Almeida, Rachel de Castro; Penzim, A. M. B. Novos coletivos urbanos em Belo Horizonte: sociabilidade e estratégias de recriação dos espaços públicos. In: 42 Encontro Anual da ANPOCS, 2018, Caxambu, MG. Anais [...]. ANPOCS, 2018.
- Almeida, Rachel de Castro; Penzim, A. M. B. Novos coletivos urbanos e as expressões de lutas emancipatórias: os saraus em Belo Horizonte. In: XIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, 2018, Guarulhos, SP. Anais [...]. Conlab, 2018.
- Argier, M. Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos. São Paulo: Terceiro Nome, 2011.
- COLLINS, Randall. Quatro Tradições Sociológicas. Petrópolis: Vozes, 2009.
- Bassi, Karine. Eleições. (96). In: Oliveira, Karine (org). Raízes: resistência histórica. Belo Horizonte: Ed. Venas Abiertas, 2018.
- Bassi, Karine. Prefácio (sn). In: Machado, Dione; Oliveira, Karine. (orgs). À Luz, à Voz: coletivoz sarau de periferia. Belo Horizonte: Ed. Venas Abiertas, 2018.
- Brasil. Ministério da Cidadania. Patrimônio em processo: restauração do Espaço Comum Luiz Estrela. 23 de outubro de 2017. Disponível em <http://cultura.gov.br/patrimonio-em-processo-restauracao-do-espaco-comum-luiz-estrela/> Acesso em 20 de maio de 2019.
- Brenner, Neil; Marcuse, Peter; Mayer, Margit. Cidades para pessoas, sem fins lucrativos? In: Brenner, Neil. Espaços da Urbanização: o urbano a partir da teoria crítica. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrôpoles, 2018.
- Caldeira, Teresa. Movimentos Sociais, Produção Cultural e Protestos: a mudança da paisagem política de São Paulo. Antropologia atual. 2015. 56 (11): S126-S136.
- Caldeira, Teresa. São Paulo: The City and Its Protests, Open Democracy, 11 July 2013.
- Campos, Luiz Fernanda. Ocupa Belo Horizonte: cultura, cidadania e fluxos informacionais no Duelo de MCs. In: Libânio, Clarice (org.). Favelas e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência. Belo Horizonte: Favela é isso aí, 2016. p.13-25.



Coelho, Rogério. Apresentação (sn). In: Machado, Dione; Oliveira, Karine. (orgs). À Luz, à Voz: coletivos sarau de periferia. Belo Horizonte: Ed. Venas Abiertas, 2018.

Costa, Heloisa Soares de Moura; Mendonça, Jupira. Gonçalves. Novidades e permanências na produção do espaço da metrópole: um olhar a partir de Belo Horizonte. In: Fabricio Leal de Oliveira; Adauto Lucio Cardoso; Heloisa Soares de Moura Costa; Carlos Bernardo Vainer. (Org.). Grandes projetos metropolitanos: Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 1ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2012, v. 1, p. 46-65.

Costa, Marcela Menezes; Silva, Vanessa Camila. Cultura e identidade na cidade: o hip hop na voz e no ritmo da juventude nevensense. In: Libânio, Clarice de Assis (org.).

Periferias em rede: experiências e perspectivas. Belo Horizonte: Favela é isso aí, 2018. p.231-250.

D'andrea, Tiaraju. A formação dos sujeitos periféricos: cultura e política na periferia de São Paulo. 2013. (Tese Doutorado) – FFLCH/USP, Departamento de Sociologia, São Paulo.

Felix, Camila. Atlas dos saraus da RMBH. Belo Horizonte: Crivo Editorial, 2018.

Fillieule, Oliver; TARTAKOWSKY, Danielle. La manifestación: cuando la acción colectiva toma las calles. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores, 2015.

Flor, Priscila. Clube da Esquina. (60). In: Oliveira, Karine (org). Raízes: resistência histórica. Belo Horizonte: Ed. Venas Abiertas, 2018.

Flor, Priscila. Veja bem, Senhora. (59). In: Oliveira, Karine (org). Raízes: resistência histórica. Belo Horizonte: Ed. Venas Abiertas, 2018.

Fonseca, Rodolfo Nazareth Junqueira. Pelé: um artista pintando um novo olhar sobre a favela. In: LIBÂNIO, Clarice (org.). Favelas e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência. Belo Horizonte: Favela é isso aí, 2016. p.41-53.

Fortuna, Carlos. Culturas urbanas e espaços públicos: Sobre as cidades e a emergência de um novo paradigma sociológico. Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 63, p. 123-148, 2002,

Frugoli JR., Heitor. Ativismo urbano em São Paulo. Cad. CRH [online]. 2018, vol.31, n.82, pp.75-86.

Frúgoli Jr., Heitor. Sociabilidade Urbana. Coleção Passo-a-Passo. Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro. 2007. 72 pp

Georges, I.; Rizek, C. S. (2016). Práticas e dispositivos: escalas, territórios e atores. Contemporânea - Revista de Sociologia da UFSCAR, v. 6, pp. 51-74.

Gohn, Maria da Glória. Jovens na política na atualidade – uma nova cultura de participação. Cad. CRH [online]. 2018, vol.31, n.82, pp.117-133.



Gohn, Maria da Glória. Marcos Referenciais Teóricos que têm dado Suporte às Análises dos Movimentos Sociais e Ações Coletivas no Brasil – 1970-2018. *Revista Brasileira de Sociologia*, v. 6, n.14, 2018, pp. 5-33.

Gohn, Maria da Gloria. Os jovens e as praças dos indignados: territórios de cidadania. *Revista Brasileira de Sociologia*. V 01. N.02, Jul/Dez 2013.

Harvey, David. *Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana*. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

Holston, James. *Cidadania Insurgente: disjunções da democracia e da modernidade no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Hou, Jeffrey; Knierbein, Sabine. *City Unsilenced. Urban Resistance and Public Space in the Age of Shrinking Democracy*. New York: Routledge, 2017.

Joseph, Isaac. *Erving Goffman e a Microsociologia*. São Paulo: FGV, 2000.

Joseph, Isaac. Paisagens urbanas, coisas públicas. *CADERNO CRH*, Salvador, n. 30/31, p. 11-40, jan./dez. 1999

Knierbein, Sabine; Dominguez, María Cristina. El espacio público relacional como conector de los estudios urbanos: relational public space as connector of urban studies. *Gestión y Ambiente*. 2014. Volumen 17 (1): 69-85

Knierbein, Sabine; Viderman, Tihomi. *Public Space Unbound. Urban Emancipation and the Post-Political Condition*. New York: Routledge, 2018.

Lefebvre, H. *A vida cotidiana no mundo moderno*. São Paulo: Ática, 1980. Lefebvre, H. *La production de l'espace*. 4.ed. Paris: Éditions Anthropos, 2000. Lefebvre, Henri. *A revolução urbana*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999, p.112. Lefebvre, Henri. *O direito à cidade*. São Paulo: Centauro, 2001.

Libânio, Clarice de Assis. O papel das práticas culturais nos processos de mudança social: olhando através do mapeamento das favelas de Belo Horizonte. In: Libânio, Clarice de Assis (org.). *Periferias em rede: experiências e perspectivas*. Belo Horizonte: Favela é isso aí, 2018. p.123-146.

Low, S. Public Space and the Public Sphere: The Legacy of Neil Smith. *Antipode*, 2015, 49(S1), 153–170. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/anti.12189>> . Acesso em: 12 de janeiro de 2018.

Low, S., & SMITH, N. (Eds.). *The politics of public space*. London and New York: Routledge, 2006.

Machado, Dione; Oliveira, Karine. (orgs). *À Luz, à Voz: coletivoz sarau de periferia*. Belo Horizonte: Ed. Venas Abiertas, 2018.



Magnani, Jose Guilherme Cantor. Etnografia como prática e experiência. Horizontes Antropológicos (UFRGS. Impresso), v. 32, p. 129-156, 2009. <<https://bit.ly/2KWk2NC>> Acesso em 12 de novembro de 2018.

Mannheim. Karl. O problema da juventude na sociedade moderna. In: Britto, Sulamita (org.). Sociologia da Juventude I: da europa de Marx à América Latina de hoje. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1968.

Maricato, Ermínia. Cidades rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, Carta Maior, 2013, 112p.

Mendonça, Jupira Gonçalves; Andrade, Luciana Teixeira de; DINIZ, Alexandre Magno Alves. Introdução: Mudanças e permanências na estrutura socioeconômica e territorial na Região Metropolitana de Belo Horizonte. In: Andrade, Luciana Teixeira de; Mendonça, Jupira; Diniz, Alexandre Magno Alves (ed). Belo Horizonte: transformações na ordem urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrôpoles; Belo Horizonte: PUC-Minas, 2015. Disponível em: <<https://bit.ly/392kRw5>> Acesso em 12 de novembro de 2018.

Mitchell, D. The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. New York: Guilford Press, 2003.

Nascimento, Érica Peçanha do. É tudo nosso! Produção cultural na periferia paulistana. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2011. Tese de Doutorado em Antropologia Social. Disponível em: <<https://bit.ly/2XaHR6N>> Acesso em 20 de novembro de 2018.

Oliveira, Karine (org). Raízes: resistência histórica. Belo Horizonte: Ed. Venas Abiertas, 2018.

PAIS, José Machado. A construção sociológica da juventude - alguns contributos. Análise Social, vol. XXV (105-106), 1990 (1.º, 2.º), 139-165.

Pais, José Machado. Culturas Juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. 1993.

Pais, José Machado; Cairns, David; Pappámikail, Lia. Jovens europeus: retrato da diversidade. Tempo Social, v. 17, n. 2, nov. 2005.

Reis, Bruno Márcio de Castro. A cultura na periferia metropolitana: vida, política e engajamento em Vespasiano/MG. In: Libânio, Clarice de Assis (org.). Periferias em rede: experiências e perspectivas. Belo Horizonte: Favela é isso aí, 2018. p.203-214.

Ribeiro, Luiz Cesar de Queiroz; Santos Jr, Orlando Alves dos. Democracia e cidade: divisão social da cidade e cidadania na sociedade brasileira. Análise Social, vol. XL (174), 2005, 87-109.



Rosa, Marcos. Microplanejamento. Práticas Urbanas Criativas. 2ª ed. São Paulo: Ed. de Cultura, 2011.

Salcedo Hansen, Rodrigo. El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el urbanismo post-moderno. EURE (Santiago), Santiago, v. 28, n. 84, p. 5-19, sept. 2002. Disponible em: <<https://bit.ly/2MwG2yJ>>. accedido en 05 agosto 2019. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008400001>.

Scalon, Celi. Juventude, igualdade e protestos. Revista Brasileira de Sociologia, v.1, n.2, 2014, pp. 179-204.

Schmid, C. (2012). A Teoria da produção do espaço de Henri Lefebvre: a uma dialética tridimensional. GEOUSP Espaço E Tempo (Online), (32), 89-109. <<https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2012.74284>>. Acesso em: 12 de janeiro de 2018.

Sennett, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

Simmel, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito [1903]. Mana, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 577-591, out./2005. Disponível em: <<https://bit.ly/2L4CxPQ>>

Souza, Charles Benedito Gemaque. A contribuição de Henri Lefebvre para reflexão do espaço urbano da Amazônia, Confins [Online], 5 | 2009, Disponível em: <http://journals.openedition.org/confins/5633> Acesso em 20 de novembro de 2018.

Torres, Haroldo da Gama; MARQUES, Eduardo. Políticas sociais e território: uma abordagem metropolitana. São Paulo em Perspectiva, 2004, 18(4), pp. 28-38.

Zukin, Sharon. Paisagens urbanas pós-modernas: mapeando cultura e poder. In Arantes, Antônio Augusto (org). O espaço da diferença. Campinas, Papirus, 2000. pp 80- 103.



O 55º congresso da une: Análise do discurso e fotográfico do maior evento da juventude universitária brasileira

Thiago Modenesi

Resumo

O presente artigo analisa o debate na defesa e elaboração de políticas públicas na área do ensino superior presentes no discurso e nos documentos fotográficos do 55º Congresso da União Nacional dos Estudantes – UNE, realizado de 14 a 18 de junho de 2017 na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Para realizar tal análise nos apoiamos nos estudos de Kossoy (2009) sobre a interpretação dos documentos fotográficos e da análise dos discursos através dos estudos de Pêcheux (1998) e Foucault (1988). O Congresso da UNE é o maior evento realizado no Brasil entre os jovens universitários, reúne representantes de todos os estados da federação e de todas as universidades públicas e privadas do país, analisá-lo nos permite construir um retrato do pensamento da juventude universitária brasileiro no princípio do século XXI acerca das políticas implementadas ou pretendidas no setor público de ensino superior. Situamos o mesmo no campo da fenomenologia, em particular nas teorias de Merleau-Ponty (1996), tendo em vista que o autor do artigo já participou de congressos anteriores da entidade e redigiu o presente observando presencialmente o 55º congresso da mesma.

Palavras chave

Políticas Públicas; Estudantes; Movimento Estudantil.

Resumen

Este artículo analiza el debate sobre la defensa y elaboración de políticas públicas en el área de la educación superior presente en el discurso y documentos fotográficos del 55 ° Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes - UNE, celebrado del 14 al 18 de junio de 2017 en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais. Para llevar a cabo dicho análisis, confiamos en los estudios de Kossoy (2009) sobre la interpretación de documentos fotográficos y el análisis del discurso a través de los estudios de Pêcheux (1998) y Foucault (1988). El Congreso UNE es el evento más grande realizado en Brasil entre jóvenes universitarios. Reúne a representantes de todos los estados de la federación y de todas las universidades públicas y privadas del país. Analizarlo nos permite construir un retrato del pensamiento de la juventud universitaria brasileña en Brasil. Siglo XXI sobre políticas implementadas o destinadas al sector público de



educación superior. Encontramos lo mismo en el campo de la fenomenología, en particular en las teorías de Merleau-Ponty (1996), considerando que el autor del artículo ya ha participado en congresos anteriores de la entidad y escribió el presente observando su 55 ° congreso.

Palabras clave

Políticas públicas; Estudiantes; Movimiento estudiantil.

Introdução

Nosso artigo parte da oportunidade que tivemos de estar presente no 55º Congresso da UNE em Belo Horizonte durante os dias 14 a 18 do mês de junho de 2017, aqui com o intuito da elaboração deste relato acadêmico enquanto pesquisador da temática da educação e da juventude.

Dito isto, buscamos situar o presente no debate da fenomenologia, tendo em vista que não é o primeiro contato deste autor com esse tipo de evento, no entanto é a primeira vez que participamos na condição de pesquisador.

Faremos a discussão a partir dos conceitos de Merleau-Ponty (1990), em particular quando discute o aspecto da experiência vivida não como algo meramente subjetivo, está sim articulando com o mundo que contém objetivamente o aspecto em particular que vivenciamos.

Nossa proposta foi buscar transcrever e analisar as ideias dos estudantes representadas nos cadernos de teses do evento por políticas públicas na área da educação superior, bem como nas fotografias ali tiradas, aqui tratadas enquanto documentos fotográficos, segundo as teorias de Kossoy (2003) quando as analisa em todos os seus detalhes e minúcias.

O evento reuniu cerca de 10.000 jovens de todos os estados e regiões do Brasil, foi marcado pela presença de mais de 30 das chamadas “correntes de opinião” em que os delegados presentes se organizam, a maioria vinculada a juventudes de partidos de esquerda, e construiu um rico panorama para debater vários temas candentes e atuais da juventude, como cultura, gênero, direitos LGBT, conjuntura política, o próprio movimento estudiantil, meio ambiente, petróleo, ensino superior, políticas públicas, entre outros.



Destacamos que nesse congresso ocorreram 36 mesas, divididas em 3 eixos (Democracia, Educação e Brasil) com convidados que possuíam acúmulo acadêmico e científico para discutir tais pautas, ali se fizeram presentes ex-ministros, deputados federais, economistas, pensadores, entidades irmãs do movimento estudantil, a exemplo da Associação Nacional de Pós-graduandos – ANPG, sindicalistas, movimentos sociais, movimentos de luta pela posse de terra e muitos outros que expuseram nos debates, este ia recebendo adendos pelos delegados e delegadas presentes.

Analisamos aqui, em particular, os debates ocorridos nas mesas do eixo de educação e das propostas apresentadas e votadas na plenária final, o faremos observando o discurso contido nas 20 teses que foram inscritas ao congresso e compiladas no formato brochura pela UNE, nos discursos dos delegados gravados por nós e nas fotografias que colhemos e executamos pessoalmente durante o evento.

Com este fim, abordamos o discurso a partir do que teorizaram Foucault (1988) e Pêcheux (1998) acerca do tema, entendemos aqui que a análise do discurso é uma prática e um campo da linguística e da comunicação, especializado em particular na análise das construções ideológicas presentes em um texto. A análise do discurso é colocada partindo da filosofia materialista, esta que põe em tela a prática das ciências humanas, bem como a divisão do trabalho intelectual, de forma reflexiva.

Para Foucault (1998), *discurso* é a prática social da produção de textos, construída historicamente e filosoficamente pelo homem no decorrer da edificação da civilização. Isto significa que todo discurso é fruto de uma construção de tipo social, nunca individual, sendo assim, só poderá vir a ser analisado se considerarmos seu *contexto* histórico-social, suas condições de produção.

Ainda significa que o discurso reflete uma visão de mundo determinada, necessariamente, vinculada à dos seus autores, mas também da sociedade em que estão historicamente inseridos.

Os textos, no nosso caso os presentes nas teses das chamadas correntes ou coletivos que participaram do 55º Congresso, é o produto da atividade discursiva, o objeto de tipo empírico da análise do discurso, o instrumento sobre o qual nos apoiaremos para construir o que nos propomos em nossa pesquisa.

São a construção sobre a qual nos debruçaremos para buscar, ao menos em sua superfície, as marcas que guiam a investigação científica. É necessário, porém,



ressaltar que o objeto principal e indispensável da análise do discurso é o *discurso em si*.

Destarte, as falas dos delegados nos grupos, a partir do exposto pelos convidados em cada mesa, marcam a construção do discurso e do conteúdo sobre as políticas públicas para o ensino superior, tornando verbal as ideias contidas nas teses do congresso da UNE a serem analisadas por nós na busca da sistematização e materialização das críticas ao ensino superior e suas limitações, mas também na proposição de novos rumos e iniciativas que incrementem e potencializem o mesmo.

A une

A União Nacional dos Estudantes – UNE é a entidade mais tradicional da juventude brasileira, com quase um século de existência. Vários pesquisadores a retratam em seus trabalhos, aqui partimos do construído por Poerner (2004) no seu livro *O Poder Jovem* que conta a trajetória desta, mas não só: também aborda os movimentos de juventude e estudantes desde os primórdios do Brasil.

Nascida no finalzinho da Segunda República, em 13 de agosto de 1937, na Casa do Estudante do Brasil, a União Nacional dos Estudantes só entraria em ação durante o Estado Novo. Fruto de uma tomada de consciência, quanto à necessidade da organização em caráter permanente e nacional da participação política estudantil, a UNE representa, sem qualquer dúvida, o mais importante marco divisor dessa participação ao longo da nossa história. Por isso, o movimento estudantil brasileiro e este livro são divididos em duas partes: antes e a partir da UNE. As organizações universitárias anteriores a agosto de 1937 pecavam, todas, pela transitoriedade, visando apenas a problemas específicos e determinados, em função de cuja duração nasciam e morriam. (Poerner, p. 117, 2004)

Poerner (2004) nos mostra em sua obra todo o trajeto da construção da UNE em 1937, combate ao Estado Novo, campanha do Petróleo é Nosso, combate a Ditadura Militar, redemocratização, Fora Collor, resistência ao governo Fernando Henrique Cardoso e importância da entidade em todo esse processo.

A mesma, no decorrer de sua história, possuiu eleições diretas, mas acabou por consolidar o processo de eleições congressuais que são antecedidas por sufrágios em cada curso de cada universidade pública e privada do Brasil.

Os congressos nacionais são bianuais e acontecem em cidades diferentes, no geral da região central do Brasil, para facilitar a participação e transporte de estudantes, devido ao grande número de participantes.



A entidade acabou por se fortalecer, como bem assinala Poerner (2004), justamente por ser perene, ter se mantido em atividade todos esses anos, mesmo após a prisão e assassinato de vários de seus líderes na Ditadura Militar, essa acabou com o congresso que acontecia nesses anos na cidade de Ibiúna (São Paulo) em 1968, por exemplo.

Também destaca o autor a interatividade com os estudantes nas universidades, os eventos de cunho nacional e a construção de bandeiras e lutas com abrangência de todo o Brasil, fortalecendo a mesma como a maior referência desse tipo de entidade da América Latina.

O que diz o caderno de teses do 55º congresso da une

O caderno de teses é algo recente na história da UNE, na nossa visão amplia o debate ao oferecer que os delegados e delegadas possuam todas as opiniões sistematizadas pelas correntes e coletivos que disputam a diretoria da entidade.

Ao mesmo tempo, o mesmo nos permite analisar o que há de convergente e divergente no discurso escrito e impresso para grande público pelas referidas correntes e coletivos que participam do evento.

Logo em sua apresentação, a diretoria da entidade que ali encerraria o mandato, reflete o espírito e objetivo da publicação que orientou os debates do congresso, apresentando ao leitor o Caderno de Teses do evento que analisamos:

Os múltiplos olhares, ideias e propostas são a riqueza da maior entidade estudantil brasileira. Esse Caderno de Teses evidencia essa diversidade de pensamento que compõe a União Nacional dos Estudantes há 80 anos.

A UNE, que sempre lutou pela educação, pelo Brasil e em defesa da democracia, traz também estes valores para dentro de sua gestão. Por isso, este espaço, onde todas as vozes são bem-vindas, é símbolo de seu compromisso para a coexistência dessas diferentes correntes de pensamento dentro da entidade. (Caderno De Teses UNE, 2017, p. 7)

Tratamos em nosso artigo de uma entidade com 80 anos de existência, presente nos maiores embates deste período, mas marcada pela pluralidade de correntes e opiniões em seu seio, praticamente em todos os momentos de sua história.

Nos parece um bom método analisar o que há de convergente entre as 20 teses apresentadas no contexto do 55º Congresso da UNE, o fazemos sem negar as polêmicas e divergências presentes nas mesmas, em particular quando se trata da avaliação da gestão que se encerra.



Há em todas uma percepção de que o atual governo federal, encabeçado pelo então Presidente Michel Temer, é um fato decisivo no desmonte do ensino público em todos os níveis, o conjunto delas propõem a bandeira da antecipação das eleições para o cargo buscando repactuar a política nacional e seus desdobramentos educacionais.

A tese que liderou a coalizão vencedora do congresso abre o caderno, chama-se Vem Quem Tem Coragem, a mesma representou 46% dos votos dos delegados e delegadas presentes ao evento, participando da plenária final da chapa Frente Brasil Popular que obteve quase 80% dos votos.

A plenária final é o último momento do congresso e o único em que todos os estudantes presentes ao evento se encontram em mesmo espaço, nesse caso em um ginásio de Belo Horizonte, ali a diretoria que encerra seu mandato submete a votação o conjunto de propostas levantadas nos grupos e elege a nova diretoria da entidade por voto em urnas para o próximo período de dois anos.

Este movimento destaca em seu discurso escrito na tese a defesa da gratuidade do ensino como pauta atual, bem como contrapõe o atual momento da educação brasileira ao que chama de avanços do governo anterior, no caso o do ex-presidente Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff.

Pauta histórica do movimento estudantil também presente no texto deste movimento é contra o aumento abusivo das mensalidades, a novidade aqui é a crítica ao ensino *online* de caráter obrigatório em algumas disciplinas do ensino superior.

Para a tese Vem Quem Tem Coragem aconteceram mudanças consideráveis na composição da universidade pública brasileira, mudanças na composição social das mesmas inclusive:

A nova composição social da universidade é fruto dessas transformações que são conquistas históricas da UNE, que ao longo dos seus 80 anos sempre dedicou sua história às lutas do povo. Se antes apenas os filhos de doutores se perpetuavam nos bancos universitários, agora são os filhos dos trabalhadores que adentram as instituições de ensino superior para transformá-las em espaços mais democráticos. Essa realidade gera novas demandas para os estudantes e a assistência estudantil passa a ser prioridade para que essas transformações sigam. Quem entrou na universidade, enfrentando séculos de desigualdade, agora quer permanecer e concluir seu curso! Nós somos a geração fruto dessas vitórias do movimento estudantil, que inauguraram uma nova época no ensino superior. A luta por políticas de permanência deixa de ser uma



mera demanda e passa a ser uma exigência para a ratificação desse novo momento da universidade brasileira! (Caderno De Teses UNE, 2017, p. 13-14)

Os estudantes ainda destacam sua luta para o cumprimento do investimento do Produto Interno Bruto em 10% para a educação e de 100% dos *royalties* da camada do pré-sal para o mesmo fim.

Aqui nos apoiamos no conceito de ordem de discursos, enquanto um conjunto ou mesmo série de formatos de discursos, definidos socialmente, segundo Foucault (1998) partindo do entendimento que há uma determinada origem comum, nesse caso, o contexto posto do 55º congresso da União Nacional dos Estudantes e as teses a ele inscritas.

São estes discursos que foram produzidos num mesmo contexto determinado de uma instituição (UNE), com a finalidade da circulação interna, mas também externa, e que interagem não apenas entre eles, mas também com textos de outras ordens discursivas, a chamada intertextualidade, que nos mostraram que as teses dialogam para além dos contornos textuais do congresso, se relacionando com as leis brasileiras e outras publicações e organizações que analisam a realidade educacional e social.

A importância de Foucault (1998), nesse caso específico para a análise do discurso das teses da UNE, está em contextualizar os discursos como elementos interligados em redes sociais, mas também sendo determinados socialmente por regras, além disso podendo serem modificados na medida em que dialogam permanentemente com outros textos que chegam ao emissor, influenciando o mesmo na confecção de seus próprios discursos.

Todas as teses ao congresso da UNE dialogam em algum momento com os textos que carregam as opiniões de partidos ou organizações políticas situadas quase todas no campo político da esquerda brasileira, tendo seu discurso influenciado por estas, mas também participando da construção do discurso geral das mesmas.

No caso da tese que ora analisamos, se faz presente a avaliação de avanços após o período da ditadura militar e que a luta dos estudantes agora é para assegurar a manutenção dos avanços. Para tanto, defendem a manutenção dos programas sociais federais PROUNI e FIES e a manutenção das universidades públicas estaduais que se encontram em crise financeira.



As pautas novas e as antigas se misturam, dando a sensação de permanência e mudança, propagada no discurso do avanço recente que esta e a maioria das demais teses defendem em seus textos.

Em outra tese, escrita no caderno pelo Coletivo Kizomba, o mesmo retoma o discurso dos 80 anos da UNE como algo emblemático e parte disso para contextualizar o seu papel no questionamento ao atual governo do Presidente Temer e na articulação de uma oposição mais ampla a este.

O discurso interligado também aparece aqui, em determinado trecho remetendo a frase de Ernesto Che Guevara sobre as universidades, construindo a partir disso, discurso semelhante a tese do coletivo Vem Quem Tem Coragem:

A famosa frase de Che Guevara “que a universidade se pinte de povo” vem se tornando realidade. Mesclar o conhecimento popular com o “erudito” não é um processo isento de conflitos, pelo contrário. Novos sujeitos entram em cena pós avanços democráticos conquistados nos governos Lula e Dilma e colocam na ordem do dia que a universidade deve abarcar novas linguagens e perspectivas populares na sua composição. Queremos um projeto em que a universidade seja realmente nossa e vamos lutar para que nenhum retrocesso seja imposto às conquistas do povo brasileiro. Em tempos de resistência, é preciso saber para onde queremos avançar. Afinal de contas, “a universidade é nóiz”! (Caderno De Teses UNE, 2017, p. 29)

Aqui o coletivo Kizomba utiliza de vários recursos para ressaltar o discurso, tal qual o coletivo Vem Quem Tem Coragem utiliza o símbolo gráfico da exclamação para dar ênfase a proposta que defende e conotação de luta e combatividade.

Soma a isso a utilização propositadamente equivocada da palavra *nós*, grafando a mesma como *nóiz* para dar uma conotação popular e da periferia, vinculando-se ao conceito de popularização da universidade e da defesa do conhecimento popular que apregoa no texto.

O coletivo Kizomba se soma ao raciocínio do Vem Quem Tem Coragem e também do Levante Popular da Juventude de que o governo Temer significa um retrocesso na educação brasileira.

O Levante Popular da Juventude destaca em sua tese, inscrita com o nome Ocupar A Une Para Ocupar O Brasil, as formas de luta dos estudantes para resistir ao que chama de desmonte da educação, bem como lista as iniciativas tomadas pelo governo federal que materializariam isso:



Com Mendonça Filho (DEM- Partido dos Democratas) no Ministério da Educação vivenciamos uma série de retrocessos: sucateamento da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização Diversidade e Inclusão; recuo na implementação do Plano Nacional de Educação (PNE); reforma do Ensino Médio via medida provisória (MP 746/2016); cortes no programa de Financiamento Estudantil (FIES), no programa Universidade para Todos (PROUNI) e no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), nas bolsas de pesquisas, extensão e pós graduação, bem como o fim do Ciências sem Fronteiras e o Projeto da Escola Sem Partido (Lei da Mordaça), que retira o direito à liberdade de expressão de educadores e educadoras. (Caderno De Teses UNE, 2017, p. 50)

A tese do Levante Popular da Juventude também dialoga com o contexto externo e busca legitimar seu discurso citando trecho de música do cantor brasileiro Belchior e passagem atribuída a estudantes que participaram de luta histórica do movimento estudantil na França em 1968 no encerramento de sua contribuição no caderno de teses da UNE.

Por fim, analisamos a tese inscrita em nome da Juventude Revolução, segue a tendência de unidade no discurso geral de conjuntura e nas principais bandeiras da educação, a pauta das teses é reativa ao governo federal. Os estudantes entendem que o governo Temer causou retrocesso e pode causar mais, sendo assim, propõem medidas de mobilização para impedir que a agenda do governo avance na câmara e no senado brasileiro:

Em 2016 milhares de jovens combateram o impeachment, percebendo que os direitos estavam em jogo, Os estudantes protagonizaram lutas importantes com ocupações em escolas exigindo a retirada da MP 746 e nas universidades contra a PEC 55. Mas estas lutas não foram suficientes para barrar a aprovação. (CADERNO DE TESES UNE, 2017, p. 79)

Aparecem nas teses críticas à gestão, elogios também, discursos em defesa da unidade dos estudantes, algo materializado no alinhamento contra o governo federal e as pautas educacionais, os estudantes entendem que há um recuo nas políticas públicas aplicadas pela gestão pública, em particular junto as camadas mais carentes e vulneráveis da população, aqueles que as correntes do movimento estudantil entendem ter sido absorvidos e beneficiados na última década no ensino superior.



Imagens que refletem a luta estudantil por políticas públicas

Como opção de pesquisa escolhemos por analisar fotografias que foram tiradas pelo próprio pesquisador durante os quatro dias do 55º Congresso da UNE, foram realizadas 2 durante os debates em grupo no eixo Educação e 1 durante a plenária final do congresso.

Entendemos esse formato como a melhor ferramenta para a análise de imagens a partir do aspecto visual que elegemos como suporte do debate a que nos propomos no escopo do nosso artigo.

Aliás, não são meras fotos ou fotografias, ao analisarmos as mesmas a elevamos a categoria de *documentos fotográficos*, pelas possibilidades que contém e pela relevância para pesquisa que ora fazemos que podem efetivamente ter.

Tal análise é realizada a partir do enfoque e método proposto por Kossoy (2003) acerca da análise das imagens em um determinado tempo e contexto dado. Aqui nos apoiamos no debate que este desenvolve no uso de fotografia como fonte a ser usada não só na pesquisa, mas mesmo na interpretação de tipo históricas, destarte analisamos o documento fotográfico em si e as relações com o mundo visível que nelas estão inscritas e circunscritas.

Em seu livro *Fotografia & História* o autor estabelece um conjunto de princípios e uma proposta metodológica para realizar a investigação e a análise crítica das fontes fotográficas que se configuram em documentos fotográficos.

Neste são indicados caminhos para o exame técnico e para a análise iconográfica dessa modalidade de fontes, assim como discutidas as questões acerca da hermenêutica particular que as imagens necessitam para sua compreensão interior. Nessa linha, o autor constrói uma interpretação iconológica para decifrar aquilo que o fragmento visual não possui de claramente explícito no seu conteúdo, o que está nas entrelinhas.

Além das questões teóricas e metodológicas analisadas por Kossoy o mesmo questiona a abordagem clássica feita na história da fotografia, apoiada em uma tradição de tipo estética. Tais documentos fotográficos por nós analisados foram produzidos com fulcro metodológico e para a compreensão histórica, as mesmas foram deliberadamente pensadas assim.

Passamos na sequência a fazer a análise das fotografias, configuradas a partir desse momento enquanto documentos fotográficos, também analisando a espontaneidade e características de contexto e linguagem corporal de cada uma das analisadas.



Figura 1

Fonte: boletim da UNE distribuído durante o congresso.

O documento fotográfico nos mostra um dos auditórios que acolheram os grupos de debate no primeiro dia do congresso com essa finalidade, dia 15 de junho de 2017. Abaixo no documento fotográfico os convidados para debater a temática da educação e acima os estudantes e imprensa interagindo e propondo. Marca a fotografia a proximidade entre plateia e debatedores, praticamente misturados, separados apenas por uma mesa, e isso se desdobrou nas proposições apresentadas na sequência da exposição inicial dos convidados, com ampla e densa quantidade de intervenções dos delegados e delegadas.

No documento fotográfico 2 se apresenta ainda mais forte a tendência de proximidade e mistura entre convidados, cumprindo o papel de debatedores, e o público, formado por estudantes.

Diferente da primeira figura, a segunda retrata um debate em grupo ocorrido na parte interna de prédio da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG tratando também de educação, a relação de separação entre estudantes e convidados é mais uma vez marcada pela mesa.

Há uma clara representação de unidade entre os que apresentam o debate nas mesas e o público que interage com esses e entre si na mesma proporção, os grupos analisados nas figuras 1 e 2 tiveram mais de 50 propostas e reafirmações de opiniões contidas nas teses, já analisadas em nosso artigo em tópico anterior.



Figura 2

Fonte: boletim da UNE distribuído durante o congresso.

O debate ocorrido nos 12 grupos do eixo Educação, bem como nos demais 24 dos outros dois eixos, convergiu para plenária final que ocorreu nos dias 17 e 18 de julho de 2017 no Ginásio conhecido como Mineirinho na cidade de Belo Horizonte.

As propostas apresentadas nos Grupos de Trabalho, que ocorreram no dia 16 de julho na UFMG, e nos Grupos Temáticos foram encaminhadas ao plenário em que os delegados e delegadas votaram e aprovaram as mesmas.

Essa é a última etapa do congresso, durou dois dias e reuniu em um mesmo espaço cerca de 10.000 jovens em um misto de mobilização, disputa de opiniões e palavras de ordem entoadas pelos diversos coletivos e correntes que participam do evento.

O temário de políticas públicas perpassa todos os temas, está presente no debate da questão nacional, na avaliação que os estudantes fazem sobre o governo federal no seu atual momento, bem como da consequência de suas ações junto as universidades, emanando do Ministério da Educação. A plenária final é a consagração do evento, elege

a nova diretoria da entidade para o próximo biênio 2017-2019, aprova as pautas de lutas, moções e tira indicativos de mobilização.



Figura 3

Fonte: boletim da UNE distribuído durante o congresso.

O documento fotográfico aqui analisado mostra a forte presença das mulheres na entidade, as 3 últimas presidentes eram mulheres, e nos apresentam a chegada da atual presidente, Carina Vitral, e da candidata da chapa vitoriosa Mariana Dias.

A foto nos mostra o centro do ginásio e representa, em tese, combatividade a partir dos braços em riste de ambas, e nos gritos de guerra, também chamados de palavras de ordem, que proclamavam na entrada da plenária. Ambas chegam carregadas nos braços dos demais estudantes, comandam os ritmos entoados pelos instrumentos de percussão que acompanham as palavras de ordem e mantêm com suas posturas e atitudes o conjunto dos presentes em sintonia com as bandeiras defendidas, algo visível nos demais braços erguidos, acompanhando o movimento das duas jovens.

Tais atitudes não são novas na UNE, fazem parte da história da entidade e das lutas que os estudantes participaram e participam conduzidos pela mesma, há o novo presente na atualização das bandeiras de luta, mas também há a tradição representada nas homenagens aos presidentes anteriores e nos gestos e palavras de ordem que os mesmos executam uníssonos.



Conclusão

Acompanhar na condição de pesquisador um congresso da União Nacional dos Estudantes nos permitiu ter outro olhar sobre a entidade, analisar os que dele participam não sendo parte de nenhuma das delegações ou correntes e coletivos que disputam.

Não há como representar em palavras toda a energia e empolgação da juventude ali presente, o congresso em si é a culminância de um processo que ocorreu meses antes em cada universidade pública e privada do Brasil que elegeram delegados e delegadas para a realização do evento em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Buscamos aqui neste artigo retratar o discurso e as imagens que refletem uma concepção de movimento estudantil e de organização juvenil peculiar ao nosso país, algo que já está enraizado em nossas tradições, afinal aqui tratamos de uma entidade de 80 anos.

Na conclusão do evento, após acalorados debates, os estudantes aprovaram plataforma de lutas para o próximo biênio que serão conduzidas por uma nova diretoria presidida pela estudante baiana Mariana Dias, a mesma encabeçou a chapa vencedora que obteve quase 80% dos votos dos delegados e delegadas bem como congregou mais da metade dos coletivos e correntes de opinião presentes ao congresso, esta concorreu com mais duas chapas que tiveram juntas os restantes 20% dos votos.

Cabe destacar que entre as bandeiras discutidas e aprovadas figuram a luta pelo cumprimento do PNE, das metas de 10% do PIB e 100% dos royalties na educação, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, pela continuidade da expansão das universidades federais brasileiras, pela ampliação do investimento em assistência estudantil, em defesa das universidades estaduais que se encontram com dificuldades financeiras (a exemplo da UERJ e UEPB), fim das disciplinas online obrigatórias, manutenção do PROUNI e FIES, luta para tornar o PNAES uma política de Estado, pelo retorno do Programa Ciência Sem Fronteiras, contra a reforma do ensino médio (MP 746/16), contra a medida fiscal de austeridade (PEC 241/55) que bloqueio o investimento em educação nas próximas duas décadas, pelo debate da Reforma Universitária e uma universidade à serviço do povo, fora Temer, eleições diretas já, cobrança de uma segurança universitária efetiva em todos os campi do país, valorização e fomentação de incubadoras e empresas juniores, recomposição dos orçamentos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, construção de creches para as mães universitárias e ampliação do auxílio-moradia.



Referências

Caderno De Teses – UNE. São Paulo: UNE, 2017.

Kossoy, Boris. Fotografia e História. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.

Foucault, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1998.

Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

Pêcheux, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas: Unicamp, 1988.

Poerner, Arthur J. Poder Jovem: história da participação política dos estudantes brasileiros. Rio de Janeiro: Booklink, 2004.



Da luta pela terra à luta pela educação escolar quilombola: Trajetórias insurgentes, estratégias subversivas e mediadores políticos

Ediléia Carvalho

*“Deixamos de ser objeto de estudo para sermos pesquisadores da nossa própria história”
(Fabiana Ramos, quilombola de Santa Rita do Bracuí)*

Introdução

A história do quilombo Santa Rita do Bracuí passando pelo período colonial até os dias atuais, demonstra a centralidade da luta pela terra e pelo reconhecimento de sua identidade étnica enquanto quilombola em um contexto de disputa por poder e processos de invisibilidade que se perdura até os dias atuais, onde ganha novos contornos e enfrentamentos. Neste sentido, é marcada historicamente por estratégias de resistência, bem como de re-existência que, na perspectiva teórica decolonial aqui adotada, podem ser consideradas “subversivas”. Trata-se de estratégias que visibilizam maneiras distintas de ser, de viver, de saber e de estar no mundo (Walsh, 2012, p. 175).

Ao se perceberem enquanto um território convertido em o “outro colonial”, ameaçado constantemente pelos diferentes mecanismos de exclusão aos quais são submetidos historicamente, expressam tomada de decisões que refletem o esforço dos povos excluídos para visualizar, construir e aplicar um projeto onde as aspirações e os critérios culturais próprios são os fundamentos (Castro-Gómez, 2005).

É desse contexto que emerge a importância dos processos de mediação política protagonizada pelas jovens lideranças do quilombo Bracuí (Montero, Arruti & Pompa, 2012). Predominantemente mais jovens e afinadas com diferentes movimentos sociais, essas lideranças insurgem acessando espaços antes nunca acessados pela comunidade, construindo redes, incorporando debates e assumindo papéis fundamentais dentro e fora do território, sobretudo, no que tange a luta pelo direito a terra e território, bem como por uma escola quilombola compreendida como uma importante aliada à luta territorial.

Suas trajetórias insurgentes revelam estratégias de re-inscrições epistêmicas, cujas organizações de ações políticas foram e são fundamentadas identitariamente, tendo como referência seus modos de pensar-se enquanto território, e/ou como coletivos subalternizados (Mignolo, 2008; Castro-Gómez, 2005; Miranda, 2018). É neste contexto de discussão que o presente artigo tem por objetivo contribuir. Para tanto, discorrerá e



analisará a trajetória formativa dessas jovens lideranças, buscando destacar os diferentes momentos que constituem esse processo que irá corroborar para o início das discussões sobre o direito a uma educação escolar quilombola na comunidade.

Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento deste trabalho, de cunho qualitativo, são oriundos de uma pesquisa de doutorado desenvolvida no ano de 2019, na interface da antropologia com a educação, que constou com as seguintes etapas: 1) análise dos documentos; 2) análise bibliográfica sobre o alargado e ainda incipiente tema da educação escolar quilombola, campo este que abarca uma reflexão sobre as práticas educativas para além do contexto escolar; 3) pesquisa de campo na comunidade quilombola pesquisada, que aliou etnografia à observação participante e entrevistas.

O texto se encontra organizado da seguinte forma: Em um primeiro momento apresentaremos a comunidade Santa Rita do Bracuí, situando historicamente seu contexto de formação e luta pela terra; posteriormente descreveremos e analisaremos o percurso formativo das jovens lideranças do quilombo Santa Rita do Bracuí, destacando os diferentes momentos que constituem este processo; por fim, teceremos algumas considerações sobre a experiência aqui apresentada.

Quilombo Santa Rita do Bracuí: Um passado presente

Santa Rita do Bracuí é uma comunidade remanescente de quilombo localizada as margens da Rodovia Rio-Santos, região Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis. Segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), publicado no ano de 2016, bem como dos dados do relatório Cadastro Único (CADÚnico) de 2010, o quilombo Santa Rita do Bracuí é composto por 129 famílias, contabilizando um total de 362 moradores, aproximadamente.

Como consta no relatório antropológico da referida comunidade: “No Bracuí, memória e história aproximam-se para acertar as contas com o passado”. (Mattos & Abreu, 2009, p. 7). Passado este, marcado pelo tráfico de escravos, pela escravidão e luta pela terra e território. Um processo invisibilizado historicamente, porém vivo nos locais de memória da comunidade, nos corpos e na tradição oral de seus protagonistas.

O quilombo Santa Rita do Bracuí resulta da antiga fazenda de Santa Rita do Bracuí, adquirida pelo comendador José de Souza Breves em 1829, irmão de Joaquim Breves, conhecido na região como o Rei do café no período Brasil Império (Lourenço, 2010).



Com a abolição da escravidão e, por conseguinte, a decadência da fazenda, “abandonada à sorte de seus habitantes” (Lourenço, 2010, p. 126), o então fazendeiro e importante escravagista José de Souza Breves, que era viúvo e não tinha herdeiros diretos, registrou no dia 29 de setembro de 1879, em cartório, o inventário de seus bens afirmando a doação daquelas terras, que se encontraria em “lastimável estado de penúria”, acompanhada de cartas de alforrias, às pessoas ex-escravizadas que ali permaneceram e trabalhavam (Testamento, 1887 apud Mattos et al., 2009). Apesar da doação de suas terras feitas formalmente antes do fim da escravidão, a comunidade vem lutando, por mais de um século, pela titulação definitiva de suas terras.

Com a construção da BR-101, conhecida como Rio-Santos, no início da década de 1970 e o modelo desenvolvimentista de sociedade que chega ao local, trazendo consigo a industrialização da região, bem como a especulação imobiliária, muitas famílias que viviam no Bracuí foram expulsas de suas terras ou se viram obrigadas a vendê-las por um baixo valor para grileiros da região que os ameaçavam com frequência. Foi a partir de então, que a comunidade se viu repleta de sitiantes, especuladores e invasores, com os quais os antigos moradores as duras penas tentavam conviver (Mattos, et al., 2009). Situação que se perdura até os dias atuais.

Outro acontecimento que chega a comunidade a partir da abertura da BR-101, é a Escola Municipal Áurea Pires da Gama, hoje autodeclarada no Censo Escolar como escola quilombola, em um processo de tensões e disputas, comuns em toda ação que permite avanços na luta antirracista. Construída no início da década de 1970, a escola que recebe hoje um percentual pequeno de alunos oriundos do quilombo, veio substituir o modelo de educação que até então era ofertado na comunidade, a educação comunitária da Escola Reunida do Bracuí que atendia, majoritariamente, alunos/as da comunidade. Hoje a escola atende o total de 736 estudantes, onde 95 são autodeclarados quilombolas. Atualmente oferece apenas o segundo segmento do Ensino Fundamental (5º ao 9º ano de escolaridade), mas já foi anteriormente uma unidade escolar de séries iniciais (década de 1990-2000).

A relação com a escola municipal localizada no território de Bracuí vem sendo um campo de disputa política desde o seu nascimento. Ao longo desses, aproximadamente 45 anos de existência, a escola passou por cinco diferentes gestões que representam importantes momentos de aproximação e distanciamento da comunidade. Hoje, autodeclarada como quilombola e pedagogicamente vivenciando o processo de se *tornar uma escola quilombola* a escola experimenta um novo momento no histórico de



relação com a comunidade. Essa importante conquista, se dá, sobretudo, a partir do protagonismo das jovens lideranças frente ao debate sobre a educação na comunidade.

Retornando ao processo de formação histórica da comunidade, em 1978 assessorados pela Pastoral da Terra, os moradores de Santa Rita do Bracuí, entram com uma ação ordinária de reivindicação das terras, através da Federação de trabalhadores na agricultura do Rio de Janeiro, órgão responsável pela defesa e pelos interesses da categoria da Reforma Agrária (FETAG/RJ). Entretanto, se a luta pela terra se inicia no Bracuí por meio da legislação que abarcava as comunidades rurais de uma forma geral, a partir do final da década de 1990, a categoria jurídica ‘remanescente de quilombo’, que resultou no surgimento de novos sujeitos políticos de direitos (ARRUTI, 1997), passa a ser utilizada pela comunidade como uma forma alternativa à resolução dos antigos conflitos fundiários. A partir de então, a comunidade inicia um novo momento em seu histórico de luta ao lançar mão dos dispositivos legais existentes, via “luta quilombola”.

A aprovação do ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) de 1988, que garante por meio do Artigo 68 a propriedade definitiva e o título da terra, foi determinante para que a comunidade de Santa Rita do Bracuí se fortalecesse diante de suas características, que definem o grupo quanto a sua identidade étnica e cultural:

[...] o processo histórico de formação da comunidade, marcado pelo tráfico atlântico de escravos, pela escravização e por um processo de territorialização e luta pela terra que se inicia ainda no século XIX; a vigorosa tradição oral, que atualiza cotidianamente a memória do tráfico negreiro, do cativo e da luta pela terra; a defesa de um patrimônio cultural imaterial próprio, em torno do jongo e de outras expressões culturais como o calango, a folia de reis e as festas de Santa Rita e São José; a construção simbólica e social do território – em torno de lugares de memória (patrimônios materiais), de práticas comunitárias e da própria história do grupo - garantia fundamental de sua reprodução física, social, econômica, histórica e cultural. (Mattos, et al., 2009, p. 3).

Outro elemento ressignificador dessa memória é o jongo, patrimônio imaterial do Brasil desde 2005. Como afirmam Mattos, et al., (2009, p. 48):

Se até pouco tempo tudo parecia indicar que o jongo permaneceria apenas nas lembranças dos mais velhos, nos últimos 15 anos presenciou-se uma significativa revalorização dessa expressão festiva na comunidade. Os mais jovens mobilizaram-se na reconstrução do jongo, reaprenderam os pontos com os mais velhos e encontram ali um importante canal de mobilização de suas lutas e histórias.



Percebe-se assim, que o processo de auto-atribuição enquanto comunidade remanescente de quilombo e de construção de sua respectiva identidade quilombola ocorreu em Bracuí de forma cruzada a outro processo: o de reavivamento do jongo, através do protagonismo dos mais jovens.

O quilombo Santa Rita do Bracuí foi certificado em 1999 pela Fundação Cultural Palmares. Para tanto, como etapa concomitante e/ou posterior à certificação, foi realizado o laudo antropológico da comunidade (Bragatto, 1999). Este demonstrou o histórico de ocupação da terra a partir da permanência dos escravos na fazenda Santa Rita, após a morte de José de Souza Breves (1889), em posses familiares, com uma área de uso comum, onde ficavam equipamentos, tais como um engenho de cana, ruínas da antiga fazenda e da senzala, além de uma engenhoca. Além disso, os elementos ressaltados pelo laudo sobre a apropriação do grupo na autoatribuição quilombola foram: a ancestralidade comum; a prática do jongo na tradicional festa em homenagem à padroeira da comunidade, Santa Rita.

No entanto, o reconhecimento do Bracuí enquanto remanescente de quilombo, fato este que poderia representar a regularização das terras em nome da associação de moradores, até o momento, não resultou na conclusão exitosa do processo. Por conta disso, os moradores enfrentam de forma cada vez mais acirrada sérios conflitos territoriais dentro da sua comunidade com moradores “imigrantes”, categoria nativa destinada aos de fora que vem morar na comunidade, com as empresas do ramo imobiliário e com o próprio poder público local que insiste em desconsiderar a existência das populações tradicionais no Plano Diretor da cidade de Angra dos Reis.

Retornando ao processo de reivindicação das terras do Bracuí, foi em função da reafirmação de sua identidade quilombola que Bracuí iniciou a luta por seus direitos. A necessidade de um diálogo interno maior e de uma organização política mais concisa começou a ficar mais evidente para os próprios moradores. Estes passaram a se reunir mais, a debater mais sobre as demandas do grupo, reconhecendo que, para terem acesso a determinadas políticas, precisavam se organizar no formato de uma associação de moradores. Dessa forma, podemos dizer que o movimento realizado em torno da identidade quilombola reverberou na formação de uma organização política imprescindível à luta pela titulação.



Junto ao processo de reconhecimento positivo da identidade quilombola, o que ocorreu também em razão das práticas educativas vinculadas ao território, quatro jovens quilombolas do Bracuí ingressaram no curso de Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ (MAROUN & CARVALHO, 2017). É importante lembrar que, nesta ocasião, os jovens quilombolas estavam se abrindo para novas experiências políticas e identitárias, inaugurando uma era de protagonismo jovem já que são oriundos de uma comunidade onde a luta historicamente foi protagonizada pelos mais velhos. Tudo era muito recente. Sem dúvida aquele era um momento de grande efervescência na comunidade produzido, principalmente, a partir de se constituírem enquanto Associação de Moradores do Quilombo. Esta identidade comunitária conferia-lhes um momento bastante oportuno neste processo de se tornar quilombola.

O grupo fez parte da primeira turma do curso, iniciado no ano de 2010. A conclusão do curso por parte destes jovens parece impactar ainda mais a luta pelo reconhecimento dos direitos étnicos da comunidade. São estes jovens quilombolas que passam a consolidar, desde então, a demanda por uma educação diferenciada na escola inserida dentro do território, tendo como respaldo a legislação de educação escolar quilombola existente. Demanda esta que emerge no contexto de debates realizados pelo grupo dentro e fora da comunidade, nas formações políticas realizadas em articulação com o movimento social quilombola e outros movimentos sociais e nas discussões suscitadas a partir da proposta formativa e pedagógica do curso de Licenciatura em Educação do Campo em que ingressaram. O que resultou em novas pautas identitárias e estratégias de reorganização das agendas políticas da comunidade, onde ganha centralidade a luta pela escola quilombola, compreendida neste momento, como uma importante aliada na luta pela terra e pelo território.

Concebidos neste trabalho como mediadores políticos, recorreremos adiante ao percurso formativo desses jovens, buscando destacar os diferentes momentos que constituem esse processo que dará início as primeiras discussões sobre a educação escolar quilombola na comunidade.

A trajetória formativa das jovens lideranças do quilombo Santa Rita do Bracuí

Nesta etapa do trabalho, discorreremos sobre a trajetória formativa das jovens lideranças quilombolas da comunidade Santa Rita do Bracuí concebidos aqui como processos formativos inspiradores de trajetórias subversivas e emergentes (WALSH, 2012).



Fabiana Ramos, Marcos Vinicius de Almeida, Luciana Adriano e Angélica Souza Pinheiro. Quatro jovens quilombolas de trajetórias singulares, porém com uma característica em comum: a vida no território quilombola. O grupo fez parte da primeira turma do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEC) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, iniciado no ano de 2010.

É interessante perceber na fala dos quatro jovens, o que significou o ingresso na LEC em seu sentido mais afirmativo possível e de que maneira essa afirmação vai se constituindo dentro de uma complexidade de pertencimento político-universitário-comunitário. É o que iremos apresentar, ainda que brevemente, no decorrer deste capítulo.

Apesar da Licenciatura em Educação no Campo não ter sido diretamente uma escolha no que se refere ao curso em si, a importância atrelada à possibilidade de ingresso no Ensino Superior para um grupo que se viu historicamente excluído desse espaço, já era por si só uma importante conquista. Apesar de não terem dimensão do que significava o ingresso no curso naquela ocasião, as jovens lideranças afirmam que a identificação com o curso aconteceu logo após a apresentação formal da sua proposta pedagógica junto aos seus licenciandos. Entre as questões destacadas pelo grupo estão: a diversidade do corpo discente, a oportunidade de conviver com os diferentes movimentos e coletivos sociais ali presentes, a proposta política e pedagógica do curso ancorada numa perspectiva freireana de reconhecimento do campo na sua heterogeneidade, a militância dos professores junto a movimento sociais. Todas essas questões foram apontadas pelos jovens quilombolas como elementos indispensáveis para a formação acadêmica do grupo que vinha de um processo de importante reafirmação identitária, como já mencionado anteriormente, entretanto, distante das discussões acadêmicas, embora a proporção que as discussões sobre quilombos tenham tomado neste espaço nos últimos 10 anos. Como afirma uma das lideranças:

Eu nunca imaginei um dia estar na universidade pública como aluna. Fui a primeira pessoa da minha família a ingressar em uma universidade. Aliás, todos nós aqui do quilombo fomos os primeiros das nossas famílias e da comunidade também (Fabiana, julho de 2018).

Em razão disso, o ingresso na LEC é compreendido pelos jovens quilombolas como uma importante conquista. Como algo extremamente importante para o processo de formação individual e de formação coletiva que, somada a outros processos formativos



no âmbito da luta quilombola, reverberou em novos parâmetros de organização política no que se refere às pautas políticas da comunidade.

Apesar da identificação com o curso e com todo o seu contexto de formação, destaca-se no depoimento dos jovens quilombolas, a dificuldade da chegada à universidade: “Nós não tínhamos idéia do que no esperava. As muitas idas e vindas, as dificuldades e estranhamentos da vida no alojamento estudantil, a vida que ficava para trás no quilombo, entre tantas outras coisas...” (julho de 2018). Neste sentido, afirmam ter sido fundamental a convivência com os demais estudantes da turma neste período: “A forma como a turma era organizada, as tomadas de decisões. Um se preocupava com o outro, sabe? Não era o problema dos quilombolas, ou dos indígenas, dos caiçaras... era de todo o coletivo. A gente tinha uma unidade, tem até hoje” (julho de 2018).

A importância que os jovens quilombolas atribuem à constituição do curso se dá ao fato da turma ter sido formada, especificamente, por movimentos e coletivos sociais do campo. Uma turma formada por estudantes quilombolas, indígenas, caiçaras, assentados, Movimento Sem Terra (MST), Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG), ocupação urbana e Comissão Pastoral da Terra. Toda essa diversidade presente é percebida pelos jovens quilombolas como essencial para o processo de formação política e identitária de todos os grupos ali presentes, para o reconhecimento e construção de conhecimentos contra-hegemônicos, para a aproximação com as pautas políticas dos movimentos sociais representados na turma, sobretudo, para mergulharem no debate sobre a educação do campo enquanto um direito, compreendendo seu viés político-comunitário, calcado na cultura, na luta pela terra e território. É o que expressa o depoimento abaixo:

Este tempo juntos fez a gente se aproximar das demandas de outros movimentos sociais. A gente se uniu, a LEC Pronera veio pra gente se unir. Foi um grande grupo. Quando os movimentos tinham enfrentamentos, a gente ia lá. A gente se formou assim, na luta né? E a educação do campo é isso. É a luta do movimento camponês, dos povos da terra, dos sujeitos do campo. É a luta da minha mãe, do meu pai, dos nossos grãos lá do quilombo. (Marcos Vinicius, julho de 2018).

Destaca-se na fala de Marcos Vinicius uma idéia de unidade, de sentimento de coletividade e pertença identitária. Seus apontamentos nos remetem a discussão trazida por Arroyo (2012) ao analisar trajetórias e perspectivas pedagógicas de coletivos e movimentos sociais. O autor afirma que ao compreenderem dentro das relações políticas os processos de dominação, subalternização e opressão aos quais foram



submetidos histórica e socialmente, os movimentos sociais mostram o peso formador da diversidade de resistências de que são sujeitos. Todas as vivências narradas por esses sujeitos, entrelaçam-se às práticas coletivas de resistência política, mas também epistemológica, mostrando-se sujeitos em movimento, bem como em ação coletiva.

Dessa trajetória formativa na LEC, os jovens do Bracuí ressaltam também o crescimento pessoal, o amadurecimento e as transformações que cada um vivenciou dentro da universidade. Um crescimento que, segundo eles, reverberou diretamente no protagonismo do grupo frente às lutas da comunidade, tanto dentro quanto fora do território:

Eu era muito tímida mesmo. Ficava apreensiva, tinha medo e insegurança para falar. Mas com o tempo e com as ações que participávamos lá na LEC, eu aprendi que a gente tem que falar mesmo, enfrentar os nossos medos e timidez... Se não alguém vai falar por você. O Estado passa por cima e a gente perde nossos direitos, fica silenciado, abaixa a cabeça, isso não pode ocorrer. Foi um processo de crescimento ao longo da LEC, aprender a falar, sabe? Não ter medo de falar. Ter segurança... O que pra mim foi fundamental (Fabiana Ramos. Julho de 2018).

A fala de Fabiana expressa um dos objetivos centrais da perspectiva formativa da Educação do Campo enquanto modalidade de ensino, ou seja, a autonomia dos sujeitos que a constituem. Concebidos enquanto sujeitos ativos do aprendizado, tal concepção pedagógica visa, sobretudo, favorecer e instrumentalizar sujeitos não para contemplar o mundo, mas para transformá-lo (Perruso & Narvaes, 2014). Trata-se, portanto, de uma formação acadêmica comprometida, antes de tudo, com o que é político.

Passado o primeiro desafio, que foi o de ingressar na universidade, as lideranças afirmam que foi preciso criar mecanismos para lidar com tantos outros que se apresentavam no decorrer dessa trajetória universitária. Um primeiro desafio destacado foi a dificuldade de cursar o Ensino Superior tendo em vista a formação que tiveram em seus percursos escolares:

A maior dificuldade pra mim foi fazer um ensino fundamental muito defasado e de repente me ver na universidade. Eu pensei várias vezes, o que é que estou fazendo aqui. Eu não entendia muitas coisas que os professores falavam. A gente não entendia. A gente estudava o dia inteiro, já chegávamos no quarto a noite cansados e tinha que ler os textos, fazer os trabalhos... A gente não entendia muito bem o que havia sido solicitado, aí a gente falava com os professores que não tinha entendido. Mas os professores, que eram também envolvidos com movimentos sociais, compreendiam aquela dificuldade e



explicavam tudo novamente pra gente, ajudavam... Isso foi fundamental para não desistirmos. Hoje a gente ri, mas na época dava vontade de desistir (Marcos Vinicius, julho de 2018).

Um segundo desafio pontuado por eles, e que não está desassociado deste primeiro, foi o preconceito que afirmam terem enfrentado dentro da universidade pelo fato de serem quilombolas e por fazerem parte de um curso formado por movimentos sociais. Nas palavras de uma das lideranças:

Alguns cursos lá dentro da universidade eram contra a gente porque a gente era de movimentos sociais né? Eles tinham muito preconceito. Achavam que éramos menos importantes. Que o nosso curso era. E por a gente ser quilombola também, indígenas, caiçaras, MST então... Aí no começo a gente tinha medo até de andar sozinho na universidade, a gente andava em grupos. Era como se aquele lugar não fosse feito pra gente. Com o passar do tempo isso foi mudando porque nós fomos criando uma identidade para o curso, ocupando aquele espaço, reivindicando os nossos direitos, mostrando quem a gente era de verdade e não aquilo que a mídia dizia que a gente era. Aí eles foram compreendendo, interagindo mais com a gente e a gente também com os outros alunos e com a universidade. (Marcos Vinicius, julho de 2018).

As questões que aparecem no depoimento de Marcos Vinicius chamam atenção para a existência de uma concepção universalista e homogeneizadora de educação ainda presente nos textos das políticas educacionais, nas escolas e universidades, onde sujeitos são concebidos como os desiguais, membros dos coletivos desiguais, inferiores (Arroyo, 2011). Segundo Arroyo (2011), nessa visão, as desigualdades não são entendidas como dos sistemas de ensino. Estes são apenas o lócus onde os desiguais se mostram desiguais. Trata-se de um processo histórico tão perverso que leva os sujeitos a se autorresponsabilizarem pelo tal “fracasso escolar”, pela idéia de inferioridade que lhes foi imposta. Por isso a constatação da liderança do sentimento de que aquele lugar (a universidade) não os pertencia. De que não fora feito para eles.

Uma das visões persistentes dentro desta perspectiva de educação é tratar esses coletivos sociais como um fardo histórico. Nessa direção, Arroyo (2011) vai dizer que ainda carregamos como um peso, os povos que estão nas origens da nossa conformação nacional, que desde a colônia foram classificados como selvagens, incultos, tradicionais, pré-modernos, pré-políticos, irracionais, sem valores de trabalho, imprevidentes e iletrados (Arroyo, 2011, p. 5). Trata-se de uma visão racista dos coletivos populares que vem marcando os significados políticos das políticas públicas pensadas para esses coletivos, assim pensados. Dessa forma, o autor chama atenção



para o caráter urgente de promoção e consolidação de políticas educacionais que não se limitam a serem corretivas, bancárias, de limpeza, mas que vão além (Arroyo, 2011). É preciso estas estejam comprometidas com a desconstrução de heranças-fardos que a própria história colonial e pós-colonial nos legou, abandonando o ideal de igualdade abstrato e descontextualizado tão enraizado em nossos sistemas educacionais e que reconheça a riqueza das diferenças (Candau, 2012). Dessa forma, Arroyo (2011) defende que pensar as políticas públicas, a escola, a universidade, em uma perspectiva de lutas pelo reconhecimento das diferenças, adquire outra densidade política. Significa se contrapor a este ideal hegemônico, universalista e avançar para uma perspectiva que reconheça as alteridades e promova aquilo que Boaventura (Santos, 2010) vai chamar de “justiça cognitiva”, um componente indispensável da justiça social.

Embora não seja este o enfoque deste trabalho, se formos fazer uma análise daquilo que se propõe ser a Educação do Campo, podemos concebê-la como uma modalidade de educação que vem se consolidando no cenário educacional brasileiro como uma perspectiva de educação contra-hegemônica à medida que possibilita aos sujeitos do processo, excursões epistêmicas. Outras, baseadas nas dinâmicas sociais, políticas e culturais invisibilizadas. Ao longo do próprio texto é possível observarmos características do referido curso que demonstram o compromisso político e pedagógico com o reconhecimento das diferenças culturais, com a autonomia e emancipação desses sujeitos, como já dito anteriormente. Um exemplo disso é a forma como é pensada a constituição do corpo docente, discente, bem como o próprio enfoque teórico-metodológico do curso.

Retornando aos depoimentos das jovens lideranças, estes afirmam a dificuldade que foi ter que se ausentar da comunidade, de suas famílias, de toda dinâmica da vida no quilombo para viverem integralmente a universidade. Questões que somada a tantos outros desafios, pesavam bastante na decisão de continuar ali ou desistir. A necessidade de terem que morar nos alojamentos existia em função da LEC ser um curso que, por apresentar algumas especificidades, exigia uma dedicação exclusiva. Além da distância geográfica, a LEC tinha como metodologia a pedagogia da alternância, dessa forma os quatro jovens quilombolas passavam 3 meses no tempo-escola (TE) e 3 meses no tempo-comunidade (TC) desenvolvendo seus trabalhos integrados na comunidade. Foi assim durante 3 anos, tempo de duração do curso.

Angélica Souza Pinheiro, uma das jovens que fez parte da LEC, importante liderança feminina e jongueira do Bracuí, foi um dos principais elos entre a Arquisabra e outros



coletivos sociais que resultaram em muitas conquistas para a comunidade, sobretudo, em uma maior visibilidade política do grupo quilombola do Bracuí, dentro e fora de seu município. A jovem iniciou sua trajetória de militância na Arquisabra no ano de 2003 compondo sua diretoria no conselho consultivo. Foi também liderança jogueira no Projeto Pontão de Jongo/Caxambu- UFF. Ao relatar as dificuldades encontradas na universidade, afirma que também pensou em desistir. O que corroborou para a sua permanência foi o encontro com pessoas que se tornaram imprescindíveis durante o tempo que ali passou. Uma das pessoas citadas pela jovem foi a coordenadora do curso da LEC que, inclusive já havia sido sua professora em uma escola municipal em Angra dos Reis, professora Marília Campos. A referida professora surge neste cenário como uma parceira de extrema importância para a luta da comunidade de Santa Rita do Bracuí. Sua trajetória acadêmica política e militante junto a movimentos sociais do campo, trouxe diálogos que foram fundamentais para o processo formativo dos estudantes quilombolas na universidade e, mais tarde, para o próprio processo de luta e construção da escola quilombola no território.

Outra questão destacada na fala das lideranças é a forma como acionavam e se apropriavam do conhecimento científico apreendido na universidade, principalmente, para a própria luta protagonizada por estes em sua comunidade:

Com a caminhada universitária, li muitos textos e conheci autores muito importantes que poderei utilizar na minha luta no quilombo. Hoje tenho um aporte teórico que poderá ser usado no meu dia a dia ou em algum momento específico que articulado com o conhecimento que a gente traz da luta né..._Eu, por exemplo, passei a incorporar alguns temas importantes nos debates fora do ambiente universitário, momentos em que antes não tinha coragem de falar, não por não saber, mas por insegurança. Hoje eu me aproprio desse conhecimento da universidade para a minha própria luta (Pinheiro, 2014, p. 107).

Hoje carrego comigo não só o conhecimento adquirido com as matérias e livros, mas sim, passo a entendê-lo como um instrumento de luta porque a educação nos foi negada há séculos. Todos têm direito de ter acesso à educação superior. Estar aqui não é um favor. É direito. Mas é um direito também me ver neste conhecimento, neste currículo, me enxergar neste lugar. Eu só fui entender isso depois (Ramos, 2014, p. 108).

A jovem Fabiana toca em um aspecto que é central nas e para as discussões fomentadas pelas perspectivas decoloniais e interculturais de educação: “me ver neste conhecimento”, “neste currículo”. Além da importância da apropriação do conhecimento científico, sobretudo, para a luta quilombola, a resignificação que fazem deste



conhecimento através da articulação com os seus saberes próprios, constituídos na pedagogia de seus territórios étnicos, demonstra uma reação dos jovens quilombolas ao pensamento e às práticas abissais com que foram inferiorizados. Trata-se de uma resposta epistemológica ao que Boaventura de Sousa Santos chama de “um novo pensamento”, um “pensamento pós-abissal” (Santos, 2010). Segundo o autor:

(...) a busca da credibilidade para os conhecimentos não científicos não implica o descrédito do conhecimento científico. Implica, simplesmente, a sua utilização contra-hegemônica. Trata-se, por um lado, de explorar a pluralidade interna da ciência, isto é, as práticas científicas alternativas que se têm tornado visíveis através das epistemologias feministas e pós-coloniais e, por outro lado, de promover a interação e a interdependência entre os saberes científicos e outros saberes, não científicos. (Santos, 2010, p. 57).

Um espaço fundamental para a articulação entre os conhecimentos científicos apreendidos na universidade e os conhecimentos tradicionais, concebidos aqui como conhecimentos “Outros” (Walsh, 2012), aparece na fala dos jovens quilombolas como sendo o *Programa de Educação Tutorial (PET)/ Etnodesenvolvimento e educação diferenciada* onde os quilombolas do Bracuí participaram como bolsistas. O grupo era coordenado pelo professor/pesquisador André Videira que além de ter uma longa trajetória de trabalho e militância junto às comunidades quilombolas no estado do Rio de Janeiro, foi também autor do laudo antropológico do quilombo Alto da Serra no município de Rio Claro. Tal como a professora Marília Campos, a convivência acadêmica com o referido professor, aparece no depoimento dos jovens quilombolas, como de extrema importância para os primeiros debates sobre a educação escolar na comunidade quilombola do Bracuí e para a articulação da luta local com outros espaços formativos.

É, portanto também, deste contexto de imersão, a partir da perspectiva formativa proposta pelo PET, que os jovens quilombolas começam a adentrar mais especificamente no tema da educação escolar em comunidades quilombolas consolidando suas pesquisas dentro do seu próprio território.

Em 2011 a gente começa a atuar na comunidade. Nós éramos bolsistas e a gente começa a fazer parte do PET Etnodesenvolvimento. Eu era muito tímida, não conseguia me expressar em público e o que me ajudou muito foi isso, foi estar nesses espaços, participar dos debates, das apresentações... Aí em 2011 veio o Cine Quilombo, um projeto lá na comunidade onde eu participei coordenando com outra pessoa, abordando



alguns temas como o racismo... E no final fazíamos um debate e era muito bom. Eu já me sentia mais segura. Foi um crescimento pra mim. (Fabiana Ramos, julho de 2018).

A participação no PET e sua articulação com os movimentos sociais dentro e fora da universidade me ensinou a ter autonomia para falar sobre quilombos na minha turma, na universidade e também em outros espaços de formação e militância. Me preparou para esses ambientes, mostrando a realidade de um quilombo e de suas diferenças étnicas, suas especificidades. Coisas que a escola não ensina, não nos prepara, nem mesmo reconhece como existente (Angélica Pinheiro, janeiro de 2014).

A proposta teórico-metodológica do PET/LEC consistia na produção do que eles chamam de trabalho-integrado. O estudante elegia uma temática dentro da sua comunidade e dedicava-se a pesquisar e produzir sobre este tema em diálogo com a produção acadêmica no campo da educação, disponibilizada ao longo do curso. Os trabalhos produzidos eram apresentados de forma articulada e integrada a proposta metodológica do curso, o Tempo-escola/Tempo-Comunidade. Dessa forma, as apresentações iam se revezando quanto ao modo e local de apresentação: na universidade e na comunidade. Como afirma Fabiana:

A gente tinha que apresentar um seminário sobre educação e pra isso a gente tinha que fazer uma pesquisa. Toda a nossa formação tinha os trabalhos integrados, cada um tinha que apresentar um tema. Angélica escolheu a história local, Luciana o jongo, Vinicius a Palmeira juçara e eu fiquei com o tema da educação, gostava desse debate. Ai comecei a pensar sobre a educação quilombola. (Fabiana, julho de 2018).

As temáticas escolhidas pelos quilombolas no âmbito do projeto integrado resultaram em suas monografias ao término do curso. Trabalhos que articularam as demandas da comunidade, suas histórias locais com todo o aporte teórico apreendidos no curso. Muito mais do que o cumprimento de uma avaliação de caráter obrigatória do curso, suas pesquisas imprimem significados decoloniais ao potencializarem a existência da produção de conhecimentos subversivos, emergentes (Walsh 2012; Santos, 2010).

Somos quatro quilombolas dentro de uma universidade que tem cem anos. Fiquei pensando como uma universidade tão grande pode receber quilombolas após cem anos de conservadorismo: ou seja, estamos quebrando os paradigmas de uma estrutura elitista. Deixamos de ser objeto de estudo para sermos pesquisadores da nossa própria história (Fabiana Ramos, 2014).

A expressão usada por Fabiana “deixamos de ser objeto de estudo para sermos pesquisadores da nossa própria história” traz importantes desdobramentos para a



compreensão do que Santos (2010) afirma quanto à evidência dos conceitos de ser humano, cultura e sociedade presentes na construção do conhecimento emergente. Evidencia aquilo que em suas palavras é definido como: “o sujeito, que a ciência moderna lançará na diáspora do conhecimento irracional, regressa investido da tarefa de fazer erguer sobre si uma nova ordem científica” (Santos, 2010, p. 69).

Sobre “quebrar paradigmas de uma estrutura elitista”-referindo-se a universidade-que só veio a receber quilombolas “após cem anos de conservadorismo”, expressa também na fala de Fabiana, podemos recorrer a Obra “Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire (1987), para pensarmos sobre a existência de uma pedagogia de conscientização da opressão e dos processos de desumanização dos quais os próprios oprimidos foram submetidos historicamente. Tal como é possível perceber no depoimento da jovem, Freire (1987) enfatiza a importância de esses grupos serem reconhecidos como sujeitos pedagógicos que se contrapõem as pedagogias hegemônicas e bancárias. De serem reconhecidos e se reconhecerem como sujeitos de outras experiências sociais, concepções, epistemologias e de outras práticas de emancipação. Logo, a necessidade dos sistemas educacionais reconhecerem a diversidade das pedagogias exigentes, das culturas, dos conhecimentos, e da existência de sujeitos outros na história intelectual e cultural da humanidade.

Neste mesmo período, imersos na discussão educacional produzida, sobretudo, neste espaço de interseção acadêmico-comunitário os 4 estudantes quilombolas começaram também a participar dos encontros formativos do Projeto “Educação Diferenciada para Quilombolas, Indígenas Guaranis e Caiçaras da Região Costa Verde”, realizado com o apoio do “Premio Tuxaua 2010” as comunidades tradicionais da Região da Costa Verde, no Sul Fluminense. O projeto Educação Diferenciada desenvolvido pelo Fórum de Populações Tradicionais de Angra, Paraty e Ubatuba buscava contribuir com a luta que as comunidades tradicionais já vinham travando dentro de seus respectivos municípios no tocante à educação escolar em seus territórios. Consistia em uma proposta teórica/metodológica denominada “Roda de Saberes e fazeres Tradicionais”, conduzida por três perguntas norteadoras: *como aprendemos? Com quem? E em que tempo?*

Ouvindo os problemas de cada comunidade, os licenciandos quilombolas perceberam que a questão da educação escolar era um enfrentamento que perpassava a luta de todas as comunidades tradicionais daquela região. Além de problemas de ordem mais estrutural e burocrática, questões como a ausência de diálogo entre as comunidades e suas escolas locais no que tange as suas práticas pedagógicas e currículos, era o



grande mote das discussões. Em contrapartida havia ainda um desconhecimento sobre as políticas públicas incidentes sobre o tema da educação escolar em comunidades quilombolas. Questão esta que o grupo já vinha discutindo na universidade juntamente com os professores e demais coletivos sociais, logo poderiam contribuir de forma efetiva com o debate ali suscitado,

Motivados por toda essa discussão e pelo processo formativo que vinham vivenciando, os jovens do Bracuí deram início então ao debate sobre a escola localizada dentro do território da comunidade e de que maneira, através de suas formações e pesquisas poderiam contribuir para a consolidação de um projeto que subsidiasse a construção de uma escola com perspectivas quilombola no território do Bracuí, revelando potências e potencialidades na organização e sistematização de saberes específicos construídos no território quilombola ao longo da sua experiência social, cultural, histórica, política e coletiva (Gomes, 2018). Sem dúvida uma questão central para a discussão de toda e qualquer experiência educacional que se propõe educar contra o racismo, para a diversidade, na contra-hegemonia de um projeto de educação regulado pelo mercado e pela racionalidade científico-instrumental.

Ao compreenderem que o território se apresenta como algo muito além do que uma base material para a reprodução da comunidade e suas práticas, mas sim um território vivo, potente, de extrema importância imaterial, de conhecimentos “Outros”, de histórias e sujeitos subversivos na luta por emancipação, as jovens lideranças passam a entender e a pensar na importância da escola numa perspectiva territorial, ou seja, uma escola que esteja organicamente conectada à vida no quilombo e ao movimento de luta identitária protagonizada pela referida comunidade no âmbito do cenário municipal. A escola, nesse sentido, é compreendida como um espaço em disputa, bem como um instrumento de luta identitária e epistemológica. Dessa forma, compreendem que a manutenção do território depende também da reprodução e difusão de representações que estejam em consonância com as particularidades culturais, modo de vida, usos do solo, relação com a natureza, etc. Assim, a escola e o tipo de educação produzida e reproduzida em seu interior se tornam componentes estratégicos para a manutenção ou para o colapso do território. “É na escola que se começa qualquer luta” (Emerson Ramos, julho de 2018).

Com o término da graduação no ano de 2013 e o retorno do grupo a comunidade, inicia-se um novo e importante momento no histórico da luta territorial no quilombo Bracuí, agora acionada pela política de educação escolar quilombola. Inaugura-se, portanto,



processos de mediação política protagonizada pelas jovens lideranças comunitárias do Bracuí que insurgem assumindo o debate sobre a escola e a educação no quilombo, promovendo processos dialógicos de consolidação de parcerias dentro e fora do território, em articulação com a escola, bem como com outros atores sociais externos (Montero, Arruti & Pompa, 2009) de extrema importância também para o processo vivenciado.

Ainda que não seja o objetivo desse artigo, descrever a experiência vivenciada pelo Bracuí no processo de implementação da política de educação escolar quilombola na comunidade, mas sim, de analisar o percurso formativo do grupo, buscando entender como se apropriam das discussões e conhecimentos produzidos sobre educação e território e acionam este conhecimento para a luta quilombola, consideramos importante destacar algumas questões que perpassam esses dois contextos de discussão e contribuem para o debate sobre o tema da educação escolar em comunidades quilombolas. Primeiro é que a consolidação de novos debates, parcerias com a universidade e com outros coletivos sociais no âmbito das pautas políticas, agora elaboradas pelas jovens lideranças do Bracuí, construída no bojo de suas experiências formativas acadêmica-comunitária, em diálogo com a legislação existente, nos remete a pensar nas implicações do pensamento decolonial, uma vez que se enfatiza nessa perspectiva teórica a necessidade da educação ser pensada e construída *de e a partir* da história dos grupos sociais que foram silenciados e que tiveram suas culturas eliminadas historicamente e socialmente. Trata-se de uma construção “desde baixo”, como diria Walsh (2012). Pelas lentes deste referencial teórico, compreendemos que os conflitos vivenciados por estes grupos elucidam o quanto o espaço de pensamento e ação das comunidades quilombolas são gerados nas lutas por seus territórios (Escobar, 2014). Segundo, é que a proposição de uma escola com perspectivas quilombolas, tal como vai pleitear a partir de então, o quilombo Bracuí, podem ser percebidas como algo que se dá no âmbito das experiências formativas, espaços de construção coletiva de um sentido de pertencimento identitário onde essas comunidades, através de suas lideranças, apropriam-se da política educacional quilombola, reinterpretando-as de acordo com suas demandas locais. Nesses espaços de formação política, a escola passa a ser entendida dentro de um determinado contexto histórico tensionado por lutas de direito à terra, ao território e contra o racismo. Logo, a educação diferenciada pleiteada por essas lideranças pode ser compreendida como uma afirmação de sujeitos epistêmicos “Outros” no espaço escolar, ou seja, caracteriza-se como um exemplo possível de uma nova concepção de política pública, que considera o cidadão (indígena,



tradicional, do campo, quilombola ou não) como protagonista de seu plano de vida, não apenas como mero espectador ou usuário dos serviços oferecidos pelo Estado (Carvalho, 2018). É o que podemos constatar no percurso formativo das jovens lideranças do Bracuí aqui apresentada.

Considerações finais

Uma primeira consideração a fazer é que a história do quilombo Santa Rita do Bracuí, passando pelo período colonial até os dias atuais, demonstra a centralidade da luta pela terra e pelo reconhecimento de sua identidade étnica enquanto quilombola, em um contexto de disputa por poder e processos de invisibilidade que se perdura até o momento atual, onde ganha novos contornos e enfrentamentos. Nesse sentido, o território apresenta-se como algo muito além do que uma base material para a reprodução da comunidade e suas práticas. É concebido como um território vivo, potente, de extrema importância imaterial, de conhecimentos “Outros”, de histórias e sujeitos subversivos na luta por emancipação. Ao se perceberem, portanto, enquanto um território convertido em o “outro colonial”, ameaçado constantemente pelos diferentes mecanismos de exclusão aos quais são submetidos historicamente, entendem a importância dos processos educativos numa perspectiva territorial, ou seja, uma educação que esteja organicamente conectada à vida no quilombo e ao movimento de luta identitária protagonizada pela comunidade.

A segunda questão observada é que desse contexto também é que emerge a importância dos processos de mediação política protagonizada pelas jovens lideranças comunitárias do Bracuí que insurgem incorporando debates, constituindo redes e acessando espaços, antes ainda não acessado pela comunidade, como a universidade. Neste sentido, chama atenção à importância da perspectiva contra-hegemônica imbuída na proposta político-pedagógica da Licenciatura em Educação do Campo oferecida pela UFRRJ e do diferencial do corpo docente deste curso, apontado pelas lideranças quilombolas como de “extrema importância para a permanência do grupo na universidade”. Deste contexto, destaca-se também a relevância do diálogo da universidade com os movimentos sociais, promovendo espaços de interseção com as lutas do território em seus processos formativos.

O ingresso das jovens lideranças quilombolas na universidade, especialmente no curso de Licenciatura em Educação Campo (LEC), em razão do seu viés político-comunitário, impactou ainda mais a luta por políticas públicas diferenciadas dentro da comunidade Santa Rita do Bracuí, principalmente no tocante à consolidação das discussões em



torno do que seria a educação escolar quilombola, ampliando o diálogo e tecendo redes para a construção dessa experiência na referida comunidade. Nesse sentido, compreendemos que as trajetórias insurgentes dessas lideranças dentro deste espaço revelam estratégias de re-inscrições epistêmicas, cujas organizações de ações políticas foram e são fundamentadas identitariamente, tendo como referência seus modos de pensar-se enquanto território, e/ou como coletivos subalternizados (Mignolo, 2008; Castro-Gómez, 2005; Miranda, 2018). Percebe-se então que a importância dessa experiência formativa para a luta territorial foi se constituindo dentro de uma complexidade de pertencimento político-universitário-comunitário. Essa constituição de pertencimento ressoa até os dias atuais onde permanecem a pleitear a consolidação da referida política na escola inserida na comunidade, enquanto promovem essa luta também fora do aparelho do Estado, sobretudo, nos espaços do próprio território compreendido aqui como um lugar de construção e disseminação de conhecimentos tradicionais. Neste sentido, a escola pela qual lutam e buscam construir é entendida dentro de um determinado contexto histórico, tensionado por lutas de direito a terra, ao território e contra o racismo. Questões caras e que vivenciam desde o passado-presente.

Referências Bibliográficas

- Arruti, José Maurício. A emergência dos "remanescentes": notas para o diálogo entre indígenas e quilombolas. *Revista Mana*, vol.3. Rio de Janeiro, 1997.
- Arroyo, Miguel G. Políticas educacionais, igualdade e diferenças. *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação* – v.27, n.1, p. 83-94, jan./abr. 2011.
- Arroyo, Miguel G. *Outros sujeitos, outras pedagogias*. Petrópolis: Vozes, 2012.
- Bragatto, Sandra. Laudo antropológico da Comunidade Remanescente de Quilombo de Santa Rita do Bracuhy. Parecer nº004/FCP/MinC, 1999.
- Castro-Gómez. Santiago. *La poscolonialidad explicada a los niños*. Bogotá: Editorial Universidad del Cauca; Instituto Pensar/Universidad Javeriana, 2005.
- Candau, Vera Maria. Diferenças culturais, cotidiano escolar e práticas pedagógicas. In: (Org). *Didática crítica intercultural: aproximações*. Petrópolis: Vozes, 2012
- Carvalho, Ediléia de. *Tornar-se uma escola quilombola: caminhos e descaminhos de uma experiência no quilombo Santa Rita do Bracuí, Angra dos Reis, RJ*. Tese (Doutorado). Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em Educação. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro -PUC-Rio, 2018.
- Escobar, Arturo. *Sentipensar com la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín: Ediciones UNAULA, 2015.



- Freire, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- Gomes, Nilma Lino. *O movimento negro educador: Saberes construídos nas lutas por emancipação*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.
- Lourenço, Tiago Campos Pessoa. *O império dos Souza Breves nos Oitocentos: Política e escravidão nas trajetórias dos Comendadores José e Joaquim de Souza Breves*. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, UFF, 2010.
- Mattos, Hebe et al. *Relatório antropológico de caracterização histórica, econômica e sócio-cultural do quilombo de Santa Rita do Bracuí*. INCRA -SRRJ, UFF, FEC. Niterói, RJ, 2009.
- Maroun, Kalyla. Carvalho, Ediléia. *Experiências de educação quilombola: as relações entre escola e comunidade*. Revista FAEEBA – Educação e Contemporaneidade., Salvador, v. 26, n. 49, p. 87-102, maio/ago. 2017.
- Mignolo, Walter. *Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política*. Cadernos de Letras da UFF –Dossiê: Literatura, língua e identidade, no 34, p. 287-324, 2008.
- Miranda, Cláudia. *O debate pós-colonial na América-Latina: Contribuições de Silvia Rivera Cusicanqui e Santiago Castro-Gómez* in “Decolonialidade e Educação: entre teorias e práticas subversivas”–Revista Interinstitucional Artes de Educar. Rio de Janeiro, V. 3 N. 3 –pág. 213-232 (out/2017 –jan/2018).
- Montero, Paula, ARRUTI, José Maurício e POMPA, Cristina. “Para uma antropologia do político”. In: A. G. Lavallo (org.). *O horizonte da política: questões emergentes e agenda de pesquisa*. São Paulo: Unesp, 2012.
- Santos, Boaventura de Sousa. *Epistemologias do Sul*. São Paulo; Editora Cortez. 2010.
- Santos, Boaventura de Sousa. *Um discurso sobre as ciências*. São Paulo: Cortez, 2010.
- Walsh, Catherine. *Interculturalidad crítica y (de) colonialidad: Ensayos desde Abya Yala*. Quito: Ediciones Abya-yala, 2012.



Mujeres en movimiento: Organización, lucha y resistencia contra la reforma educativa de 2013 en México.

Sarahi del Mar Granados Cosme

Resumen

El impacto de las políticas neoliberales, en materia educativa, ha devenido en un cúmulo de problemas socioeducativos que han convertido a la educación en un campo de batalla. El objetivo de la investigación es analizar el papel sociopolítico de las mujeres, madres de familia, de las escuelas de nivel básico de la Ciudad de México, que durante el periodo del 2016 constituyeron una forma -renovada- de organización y nuevos repertorios de acción colectiva contra la Reforma Educativa de 2013. Se trabajó a partir de las “zonas de experiencia”, es decir, de las voces de las protagonistas del movimiento en los principales espacios de resistencia. La investigación se desarrolló en tres etapas: la primera fue el acercamiento con las madres de familia, no como objeto de estudio, sino como actores-sujetos constructoras de su propia historia; posteriormente, se realizó la articulación entre la teoría y la práctica colectiva; por último, se desarrolló la interpretación de las voces de las protagonistas del movimiento. Como resultado se obtuvo que las mujeres participantes provienen de una clase social marginada, muchas de ellas sólo concluyeron estudios de educación básica. Ellas fueron el eje articulador durante el proceso, a pesar de dichas desventajas y de que la gran mayoría no contaba con experiencias previas de participación política. A partir del acercamiento a la narrativa de las mujeres en movimiento se pudo conocer a profundidad el proceso de desarrollo de la organización, además de sus motivos y su rol en esta importante lucha en defensa de la educación.

Palabras clave

Educación; Mujeres; Organización; Lucha; Resistencia.

Introducción

El tema de investigación que guía el presente estudio consiste en la participación política de las mujeres durante el conflicto generado por la reforma educativa del 2013 en México. Dicho proceso es revisado desde la segunda oleada, la más fuerte, que se desarrolló durante la primavera y el verano del 2016 en la Ciudad de México, donde las familias, encabezadas por mujeres, cerraron escuelas, bloquearon avenidas y



participaron en las múltiples movilizaciones y actividades político-organizativas convocadas con el objetivo de abrogar la reforma educativa.

La reforma educativa fue la primera del paquete de 11 “Reformas Estructurales” impulsadas por el presidente en turno, Enrique Peña Nieto. En primera instancia, la reforma realizó modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando principalmente los derechos laborales de los maestros y el carácter público y gratuito de la educación. Las implicaciones de la reforma van más allá del ámbito administrativo-laboral, el problema de fondo se encuentra en el repliegue del Estado en su papel educador, dando continuidad al proceso de privatización de la educación.

En México las políticas neoliberales iniciaron su aplicación desde el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1982. La privatización es el enclave del neoliberalismo y sus políticas se caracterizan por aplicar rigurosos programas de ajuste económico, impulsados por las grandes potencias mundiales a través de los organismos y dependencias multilaterales. De tal forma se va abriendo espacio de intervención a las grandes empresas nacionales y mayormente transnacionales para realizar jugosos negocios y mercantilizar los derechos (Granados Cosme, 2018).

El siglo XXI se ha caracterizado por el florecimiento de “ampliadas y crecientes resistencias sociales a la implantación del modelo neoliberal y sus consecuencias” (Rauber, 2006). La lucha contra la reforma educativa y la sorprendente participación de las madres de familias de la Ciudad de México emerge en el contexto de las luchas y resistencias por lo común: contra el saqueo y despojo de recursos naturales y derechos indispensables para el desarrollo humano y social, que en esta fase actual del capitalismo se han convertido en el eje del proceso de acumulación de capital.

Cabe resaltar que las resistencias sociales que han puesto en jaque a las estructuras de poder se han caracterizado principalmente por la importante participación de las mujeres. Participación “no centrada en el Estado” y que va más allá de la agenda institucional de “equidad” en búsqueda de cuotas de género.

Las mujeres en movimiento de las que hago referencia renovaron sus formas de participación, impulsaron “otras” formas de participación política basadas en la organización popular cuya característica principal es la autonomía. Estas mujeres cuestionaron las estructuras de poder y el sistema económico social dominante: el capitalismo. Por lo tanto, en este trabajo también se pretende visibilizar la participación



histórica de las mujeres y se evidencia que ante el emergente contexto han figurado como protagonistas de la transformación social.

Ruta teórica y metodológica

Las aportaciones teóricas estimadas, corresponden a la exigencia histórica concreta, las cuales -en su mayoría- ya no consideran a los movimientos como meras expresiones conceptuales, sino como manifestaciones concretas de una realidad conflictiva agonizante, donde los actores “han creado una capacidad y creatividad teórica” (Coll Lebedebff, 2008).

El trabajo está inspirado en lo que Aubry (2011) denomina “otro modo de hacer ciencia”, lo que significa hacer un trabajo científico con compromiso social que no le estorbe la “neutralidad maculada” y no le impida hablar de la compleja realidad inmersa en la vigente lucha de clases. Porque -sin hacer calco y copia del pensamiento marxista- hasta nuestros días “la historia de todas las sociedades [...] es la historia de las luchas de clases” (Marx y Engels, 2010).

Hasta nuestros días, el enfrentamiento antagónico de clases es visible en la ideología, es decir, está presente en la forma de ver y analizar la realidad social latinoamericana.

Dos visiones se han enfrentado [...] la primera caracterizada por su posición de imperio que busca someter a los pueblos a través de la violencia, imponiendo sus intereses con todo tipo de recursos que les permita mantener la estructura del sistema capitalista. La segunda visión, está en relación con la lucha de los pueblos latinoamericanos por ser verdaderamente independientes, libres y puedan ejercer su derecho de autodeterminación, en ese hacer de los pueblos como sujetos constructores de su propia historia [...] (Freedman, 2014, pág. 9).

Desde la segunda visión es que este trabajo se ocupa de los movimientos sociales, particularmente de la importante participación política de las madres de familia de la Ciudad de México, que tomaron por asalto las escuelas y las calles en defensa de la educación pública, gratuita y laica.

La metodología de esta investigación se sostiene en el materialismo histórico-dialéctico. Como lo afirma Gutiérrez Aguilar (2017) “entender la sociedad como mosaico dinámico de antagonismos superpuestos significa estudiar los asuntos sociales a partir de sus contradicciones”, lo cual es una de las propuestas centrales del marxismo. Se retoma como eje central para el análisis y comprensión del conflicto, el desarrollo de la sociedad a partir de la lucha de clases en la que se contraponen evidentemente: “los que poseen



los medios de producción y ostentan el poder; y los que tan sólo tienen su fuerza y su conocimiento para trabajar” (CNI, 2017).

Para poder comprender la organización, lucha y resistencia encabezada por las madres de familia fue necesario considerar las “zonas de experiencia”, es decir, “el campo concreto de las luchas como espacios y territorios en los que se expresan las formas en que los actores sociales se apropian de las prácticas colectivas” (Medina Melgarejo, 2017). Por lo que se recuperaron las experiencias y voces de las protagonistas de la lucha en los principales espacios de resistencia.

Tomando en cuenta lo anterior, se precisa que la presente investigación es cualitativa, observacional y analítica, basada en fuentes primarias: los momentos exactos de la acción colectiva de las madres de familia que quedaron registrados en entrevistas, vídeos, consignas y notas periodísticas.

Mujeres en movimiento

Históricamente en todas partes del mundo las mujeres han sido invisibilizadas, condicionadas a sentirse inferiores y complementarias a los hombres, alimentando de esta forma, una de las desigualdades sociales, la de género. Ante dicha situación es pertinente analizar dentro de los espacios académicos, desde una perspectiva crítica y de género, la irrupción femenina en la vida política pública y sus repercusiones en la vida social. Frente a la invisibilidad de las mujeres en la historia del mundo se tiene que llenar uno de los vacíos en la academia, ubicando como objeto de estudio a las mujeres como sujetas históricas.

Mujeres en movimiento es la categoría que ayuda a caracterizar a las mujeres como actoras sociales emergentes ante el contexto de depredación sistémica mundial. Se da vida a esta categoría en referencia a Gutiérrez Aguilar (2017) y Zibechi (2007) para describir la participación política de las mujeres cuya organización y lucha no estuvo centrada en el Estado.

Las madres de familia que le dieron rostro al movimiento pusieron en jaque al Estado y su coraza democrática liberal, porque cuestionaron y se interpusieron a una política que vulnera el derecho a la educación pública y gratuita, y que en una sociedad donde prevalecen como mayoría las clases populares empobrecidas, la situación de vulnerabilidad económica, pone en riesgo las posibilidades de acceso a la escuela.

Es importante precisar, que si bien, la lucha contra la reforma fue sostenida por mujeres esta no fue una lucha exclusiva de mujeres ni con demandas estrictamente femeninas.



La lucha fue de carácter popular por su capacidad colectiva de articular a múltiples sectores de la sociedad: obreros, campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, sectores urbanos y hasta sectores del clero.

Lo popular hace referencia a la categoría pueblo que, desde la perspectiva marxista, se refiere al conjunto de masas populares en el que se constituyen aquellos sectores de la sociedad que sufren la explotación y la dominación sistémica. Los movimientos “son populares en cuanto surgen de los sectores populares y se reconocen en su carácter de oprimidos y explotados” (Freedman, 2014).

Es cierto que las formaciones de identidad son, ante todo, enunciaciones de significación “[...] que inventan un sentido de autenticidad y alteridad con efecto práctico en el desenvolvimiento del sujeto [...] la identidad que con mayor vigor ha comenzado a consolidarse es ésta del “pueblo sencillo y trabajador”, que ha sido capaz de integrar identidades locales, urbanas y rurales [...]” (García Linera, 2015)

El “pueblo sencillo y trabajador” inundó las calles de resistencia enarbolando su identidad a partir de las afectaciones de la reforma que puso en riesgo la educación a través de los programas “Autonomía de Gestión”, “Escuelas al Cien” y “Escuelas al Centro”. Lo que perjudicaba a indígenas, campesinos, obreros, desempleados, amas de casa, es decir, a los estratos sociales con menores ingresos.

La identidad de las madres de familia como actrices colectivas en resistencia se constituyó a través de las demandas, reivindicaciones e identificación en su condición de sectores vulnerables condenadas a la exclusión y lo que ello conlleva. Pero no fue un proceso espontáneo, para que la identidad se pudiera materializar en la participación colectiva de insumisión, fue necesaria la preparación política y la participación de los actores movilizados.

El movimiento a nivel nacional tuvo la capacidad de convocar a los sectores más vulnerables del campo y la ciudad. En el terreno local, en la Ciudad de México, las familias -encabezadas por las mujeres- pertenecían a los barrios populares, muchas de ellas eran: mujeres amas de casa, desempleadas, comerciantes u obreras; otros, eran electricistas adscritos al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en el 2009 dejó desamparados a miles de trabajadores. Había también pequeños empresarios y profesionistas fuertemente golpeados por las entrantes políticas neoliberales. Por lo que evidentemente, con base a lo planteado, se afirma que los sectores movilizados son el corazón del pueblo.



La lucha contra la reforma educativa

Sobre la lucha contra la reforma educativa se ha escrito mucho en relación al conflicto magisterial, minimizando la ferocidad de la reforma y el profundo conflicto socioeducativo a un problema administrativo y laboral -no se niega la existencia de tal conflicto- pero el movimiento fue la expresión de una lucha popular que logró articular a partir de la lucha magisterial una “multiforme capacidad colectiva” en rechazo a la reforma encaminada hacia la privatización de la educación (Gutiérrez Aguilar, 2017).

De esta forma, la lucha que aparentemente parecía ser magisterial, por las implicaciones sociales de la reforma y la capacidad de convocatoria del magisterio, se constituyó como una lucha popular, en la que emergieron en el escenario público las mujeres como protagonistas de la resistencia.

La organización y resistencia se gestó porque la educación después de haber sido un derecho garantizado por el Estado se tambaleó ante las políticas neoliberales. Las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución Mexicana, establecían en el marco jurídico y legal, de acuerdo con el documento oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (2013), que:

a) Los maestros deben ser evaluados obligatoriamente para el ingreso, promoción y permanencia en su cargo, y para asegurar una mejor calidad de la enseñanza. Esta evaluación no toma en cuenta las diferencias geográficas, políticas, sociales, culturales y económicas de las entidades tan desiguales de nuestro país.

b) Las madres y los padres de familia junto con los directivos, maestros y estudiantes bajo la “autonomía de gestión”, deberán organizarse para gestionar los costos de infraestructura y servicios básicos de las escuelas. Al elevar la autonomía de gestión a rango constitucional, el Estado comienza a desentenderse de la obligación de garantizar educación pública y gratuita a todas y todos los mexicanos.

c) “El Estado garantizará la calidad en la educación”. El concepto calidad de origen mercantil y empresarial, en sociedades como la nuestra, mediadas bajo los estándares del mercado, reduce los procesos de enseñanza y aprendizaje a meras evaluaciones estandarizadas y medibles.

Las repercusiones políticas y sociales de la reforma en el acontecer cotidiano quedaron registradas en todos los medios de comunicación. Los medios independientes y las redes sociales fungieron como acervo histórico del acontecer social. En ellos se puede localizar una cantidad amplia de información sobre las principales afectaciones de la reforma y del descontento popular.



Puesta en marcha la reforma en el año 2013, las familias de la Ciudad de México comenzaron a denunciar el cobro ilegal y excesivo de cuotas que iban de \$300.00 a \$500.00 que condicionaba el acceso de los infantes a la escuela. De igual forma denunciaron las pésimas condiciones de infraestructura y la negación del Estado para la construcción de escuelas dignas.

El ataque a la educación pública reflejado en el cobro ilegal de cuotas escolares, las malas condiciones de la infraestructura educativa, las implicaciones de la “autonomía de gestión” y la violencia como respuesta del Estado ante el conflicto socioeducativo suscitado en primera instancia con el magisterio, fueron las razones político-sociales para que las familias atendieran el llamado de los maestros a organizarse durante 2016. Así lo expresaron dos mujeres protagonistas del movimiento en la Ciudad de México:

Nosotras estamos apoyando a los maestros porque la reforma educativa no solamente los contempla a ellos, como padres de familia también nos afecta, ya no nos alcanza, ¿de dónde vamos a sacar dinero para pagar lo que van a empezar a cobrarnos como el agua, la luz y la papelería? y pues eso no nos parece. Igual estamos en desacuerdo del cómo están tratando a los maestros no nada más aquí, los medios de comunicación no dicen qué les hacen a los maestros, los están golpeando, los están mal tratando y la verdad como padre de familia es muy indignante. Estamos aquí para apoyar a los maestros y exigir que se cumpla con el derecho a la educación pública. (Cruz & Marmolejo, 2016).

De las casas y las escuelas a las calles

El proceso de movilización en la Ciudad de México tiene como elemento catalizador la llegada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, provenientes principalmente de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Campeche, Tabasco, Morelos, Puebla, Zacatecas, Estado de México y fundamentalmente Oaxaca (Granados Cosme, 2018). Su llegada a la capital fue parte del inicio del paro que estalló el 15 de mayo de 2016. Es a partir de este acontecimiento que algunos actores sociales ya organizados de la ciudad decidieron sumarse a la lucha contra la reforma. Cabe destacar que lo primero que suscitó el apoyo al paro magisterial fue la solidaridad. Todo lo anterior era distinto en los estados del sur. Es decir, en estos, la lucha magisterial desembocó en una lucha popular por los antecedentes histórico- organizativos. En la Ciudad de México estaba en proceso de gestación.

El 27 de mayo de 2016 se desarrolla un acontecimiento que da pauta a la emergencia del movimiento de las madres y padres de familia en la capital. Ese día se convocó la



“Mega Marcha Nacional” por los maestros y maestras de la CNTE, entre enormes contingentes del magisterio de todos los estados; entre contingentes de organizaciones político-sociales reconocidas por su trayectoria; entre contingentes de campesinos y comerciantes; entre contingentes de estudiantes de todas las universidades públicas; y entre el contingente de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estaba un pequeño contingente de madres de familia, únicamente mujeres. En esa ocasión, Teresa Marmolejo, una madre de familia comentó que se movilizaban “porque la reforma educativa no solamente los contempla a ellos, sino contempla el deslindarse de los pagos de la escuela, lo que son los pagos de agua, luz y ya no van a dar los libros de texto gratuito” (Granados Cosme, 2018). A partir de este momento las madres de familia inician un proceso de reconocimiento y de acuerdos políticos entre ellas.

El segundo hecho que marca el proceso organizativo con las madres de familia fue la creación de un vínculo entre estudiantes de la UNAM, la UACM, la UPN y maestros provenientes de Oaxaca, quienes tripartitamente impulsaron una jornada de “brigadas informativas” en las escuelas de la capital para “sacudir conciencias”.

A partir de ese momento inicia la segunda etapa del proceso organizativo de las familias de la Ciudad de México, en la que comenzaron a realizar asambleas escolares, juntas informativas, movilizaciones y diversas actividades informativas en las escuelas de las colonias Providencia, Campestre Aragón, Casas Alemán, San Felipe de Jesús, etc., de la delegación Gustavo A. Madero.

Las brigadas informativas se mantuvieron desde finales de mayo día con día. Comenzaron a crecer y ampliar las zonas geográficas donde se realizaban. Abarcaron las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, entre otras. En el interior de la república la resistencia se mantenía de forma masiva. En voz de Adriana Linares, madre de familia de Oaxaca, se conoció que los comités de familia se encargaron de mantener las escuelas cerradas en “defensa de la educación gratuita y popular” y en respaldo a los maestros. Muchas madres expresaban: “maestros, nosotras las familias, les decimos que se vayan a luchar y que no se preocupen, porque nosotros en nuestros estados vamos a seguir convenciendo al pueblo para que se sume a la lucha” (Linares Arroyo, 2016). Esto preocupó al Estado mexicano que respondió con represión: desalojos violentos de los plantones de la capital y del país, la agresión policiaca- militar en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, las detenciones de los principales dirigentes de la CNTE, hasta



llegar a la masacre de Nochixtlán. La violencia del Estado contra la población marca el inicio de la tercera etapa.

El 19 de junio de 2016 en la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, los pobladores junto con el magisterio de la sección 22 tenían bloqueadas las carreteras como medida de presión para que el Estado dialogara con ellos sobre las repercusiones de la reforma. Aquel día, elementos de la gendarmería nacional y la Policía Federal disolvieron los bloqueos mantenidos por las masas inconformes, once personas perdieron la vida a causa de los disparos de bala y los proyectiles lanzados, entre ellos un niño, un joven y varios padres de familia. Ese día la lucha popular contra la reforma entró en una nueva etapa porque el Estado optó por la represión abierta. Ante estos sucesos tan violentos, el Estado no tuvo la capacidad de contener el crecimiento del movimiento que se veía reflejado en las multitudinarias movilizaciones que se realizaban en la Ciudad de México, repudiando no tan sólo la reforma, sino la violencia de Estado.

Estos factores determinaron la tercera etapa del proceso organizativo de las familias de la Ciudad de México ya que para mediados de junio de 2016 se habían logrado consolidar un grupo de familias en el Frente de Madres y Padres de Familia en Defensa de la Educación. El Frente, era un grupo sólido y homogéneo, integrado por madres, padres de familia y tutores provenientes de las zonas populares y marginales de la delegación Gustavo A. Madero.

Muchas madres y padres de familia, sin tener experiencia política y organizativa fueron construyendo sus propios espacios de reflexión, discusión y toma de decisiones. Las asambleas organizadas por el Frente de Madres y Padres de Familia comenzaron a articular el descontento colectivo de las escuelas e impulsaron la construcción de "Comités en Defensa de la Educación". Muchos maestros de la Ciudad de México comenzaron a contactar al Frente para que pudieran ir a sus escuelas a dar un mensaje informativo y también muchas familias los contactaban para que ellos junto con los maestros de Oaxaca fueran a hablar con los maestros de la capital sobre las implicaciones de la reforma.

La indignación creció rápido en la capital. El punto cúlmine de la movilización de las madres de familia fue el 30 de junio del 2016, demostraron su capacidad organizativa cuando tomaron las escuelas por asalto y se apropiaron de ellas impulsando talleres y pláticas informativas en las que se involucraron los niños y niñas. Este acontecimiento fue una semana antes de que la CNTE llamara al cierre nacional de escuelas. Las familias insistían a los maestros para que se sumaran al paro indefinido, al plantón de



los maestros del interior del país y a las movilizaciones en las calles. En uno de los recorridos por las escuelas de la capital, uno de los papás les comentó que la reforma le afecta a la sociedad en general y que era momento de articular las luchas y sumar fuerzas: "...cualquier sector que se maneje solo, no vamos a hacer, ni a lograr absolutamente nada, entonces, estamos aquí para apoyarlos, para que ustedes nos apoyen también... Maestros es ahora o nunca, súmense a la lucha" (Nuestra Voz Radio, 2016 b).

Para el 5 de julio, la CNTE llamó a un cierre de escuelas en todo el país. En la Ciudad de México cientos de escuelas fueron cerradas. La prensa nacional no estaba dando cobertura total al cierre de las escuelas, la información más veraz la dieron los medios de comunicación independientes y las familias que utilizaron las redes sociales para difundir las acciones colectivas que realizaban, esto con la intención de evidenciar en el momento exacto lo que ocurría.

Mujeres hijas del pueblo

Para lograr una mayor comprensión de los procesos de resistencia es necesario identificar socialmente a los actores que se movilizan. Por eso es indispensable saber ¿quiénes son las mujeres que se organizan, resisten y luchan? ¿por qué?, ¿qué dicen?, ¿qué piensan? y ¿qué quieren?

Por medio de un cuestionario aplicado a las madres de familia se pudo conocer su condición económica-social, por lo que se afirma que son hijas del pueblo: mujeres provenientes de las colonias populares y marginadas de la Ciudad de México. A continuación, se presenta información de tres madres provenientes de las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan. Ellas estuvieron al frente de las brigadas informativas y del proceso de articulación.

Laura es mamá de tres jóvenes y un niño que estudia en la escuela primaria "Constitución de 1917" en la delegación Iztapalapa. Ella promovió la organización de las familias contra el programa "Escuelas al cien" que se aplicaría en su escuela. Estudió hasta el nivel medio superior y cuenta con una carrera técnica, trabaja de forma independiente y su ingreso mensual es de \$7000.00, por lo que señala que para ella y su esposo es complicada su situación económica.

Lily, tiene solamente un hijo que estudia en la escuela primaria "Manuel Boneta Méndez" en la delegación Gustavo A. Madero. Estudió diseño de modas y trabaja para una fábrica de ropa, su ingreso mensual es aproximadamente de \$8000.00. Ella fue la mamá que



encabezo la construcción de la Coordinadora de la Ciudad de México en Defensa de la Educación y nos platicó que no es muy difícil su situación económica, sin embargo, considera injusto que se tenga que pagar la educación que “según el artículo 3 de la constitución, es gratuita”.

Luz María, es mamá de una joven que por dos ocasiones consecutivas ha sido rechazada a la educación media superior. Es mamá soltera y sólo pudo concluir la secundaria en una escuela pública, posteriormente solicitó apoyo al Instituto de Mujeres y pudo estudiar en una escuela técnica cultora de belleza, desde entonces se dedica al estilismo. Sus ingresos son de \$7000.00 al mes y vive con complicaciones, ya que ella sola tiene que solventar los gastos familiares.

De acuerdo con los estudios más recientes sobre la pobreza urbana realizados por el CONEVAL, el número de personas en pobreza es de 53.3 millones (45.5 por ciento). De ese total, 41.8 millones corresponden a las personas en pobreza moderada y 11.5 millones a personas en pobreza extrema. En relación con el espacio de bienestar económico, los resultados muestran que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar alcanzó 51.6 por ciento, es decir, 60.6 millones de personas en el país no cuentan con los recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas y 23.5 millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria.

La población urbana metropolitana no tiene asegurada las condiciones mínimas de subsistencia y queda claro que las zonas populares de la Ciudad de México se caracterizan, en la actualidad, por el desempleo, la inestabilidad laboral y el precario salario que no alcanza a solventar los gastos de comida, vivienda y transporte; además que también se ha deteriorado el nivel educacional que no tiene la capacidad de asegurar la alta demanda de los niveles medio y superior.

Las mujeres en movimiento, como actrices emergentes “surgen al amparo de los procesos de empobrecimiento, vulnerabilidad y exclusión social producto de las políticas de apertura comercial y reestructuración del Estado” cuyo impacto en nuestros países - subdesarrollados y dependientes- ha sido escalofriante (Gluz, 2013).

La voz de las mujeres en defensa de la Educación

Decía Ricardo Flores Magón, “se necesita algo más que fusiles para que un pueblo se levante. Se necesita que el espíritu de rebeldía haya prendido bien en los cerebros de los oprimidos, y para que ese espíritu de rebeldía se manifieste, es preciso que una



propaganda eficaz lo cultive.” Las mamás de la Ciudad de México lograron prender el espíritu de rebeldía en el pueblo de la gran Tenochtitlan y los resultados de la propaganda eficaz que realizaron permitió que el pueblo se levantara en resistencia.

En esta parte del trabajo las protagonistas de la lucha tienen la palabra. Las madres de la escuela primaria “Hidroeléctrica Cupatitzio” de la delegación Gustavo A. Madero, cerraron su escuela el día 29 de junio del 2016, la señora Gloria, abuela de un niño de 3° de primaria expresó por qué estaba en contra de la reforma educativa:

Soy Gloria Macías Miranda y soy la tutora de mi nieto, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, estamos exigiendo que respeten los derechos tanto de los maestros como de los alumnos y los padres de familia porque están siendo usurpados cada una de las labores que se están llevando a cabo, no nada más aquí en la Ciudad de México, en los estados. No estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, creo que ya es tiempo de que despertemos y defendamos los derechos de cada uno de los alumnos y de cada uno de los maestros. Ellos son maestros y están enseñando, están llevando cultura a nuestra juventud y nos los están matando, entonces no podemos quedarnos callados, basta ya de estar callando y guardar silencio y permitir que se les esté tratando como delincuentes, no estamos de acuerdo en eso, por eso es que hemos decidido cerrar esta escuela, gracias. (Nuestra Voz Radio, 2016 c)

Irma Jiménez, con sus palabras y a su forma explicó por qué decidieron cerrar la escuela:

La decisión la tomamos todos los padres de familia, porque ya estamos hartos de todas las mentiras que el gobierno nos está haciendo y nosotros apoyamos más que a los maestros, a nuestros hijos, porque siempre nos dan atole con el dedo. Su reforma educativa, que es una reforma laboral, nos perjudica a todos nosotros y a nuestros hijos, con qué derecho ellos van a defender si nosotros no hablamos, tenemos que ponernos en lucha para poder salir adelante y que el gobierno se vaya abajo, porque nosotros somos quien debemos de dar la cara por nuestros hijos. (Nuestra Voz Radio, 2016 c)

Juana, del jardín de niños “Mozart”:

No estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, no estamos de acuerdo con lo de la reforma educativa ¿en qué aspecto?, que no estoy de acuerdo, que si ya me están quitando impuestos todavía tenga que estar pagando algo que se supone que es gratuito, como la educación. Aparte también estoy, bueno, estamos todos para apoyar a los maestros, también se supone que debemos de apoyarnos como pueblo, no se vale que quieran privatizar todo, al rato ya nada va a ser de nosotros, prácticamente incluso



ahorita ya nada es de nosotros, ni el agua, ni la luz, ni el petróleo ¡nada! (Nuestra Voz Radio, 2016 d)

El mensaje de las madres es el mismo, ellas se organizaron y lucharon contra el Estado y su gobierno que pretende arrebatarles lo único que pueden heredar a sus hijos: la educación como derecho social.

Conclusiones y reflexiones finales

Considero un error exponer que la lucha contra la reforma educativa fue sólo magisterial. Este error puede llevar a la conclusión que la reforma educativa era sólo laboral y no un proceso más profundo de privatización. Así, múltiples y diversos sectores sociales emergieron para hacer frente a la política educativa neoliberal como proyecto de Estado. Por eso, la lucha contra la reforma educativa inundó de pueblo las calles y ésta no fue solamente magisterial, sino que adquirió carácter popular y las mujeres fueron la columna vertebral.

Las mujeres participantes en la lucha contra la reforma educativa, durante el ciclo de movilización de 2016, provienen de una clase social marginada, muchas de ellas sólo concluyeron estudios de educación básica. Ellas fueron el eje articulador durante el proceso de confrontación en la Ciudad de México, a pesar de dichas desventajas y de que la gran mayoría no contaba con experiencias previas de participación política.

Estas mujeres lucharon contra todo un sistema que trastoca hasta su vida privada. Ellas, sin estar entre sus demandas, lucharon contra el sistema patriarcal que limita su participación política. A pesar de que factores como el sexismo, la doble jornada de trabajo y la internalización de la ideología patriarcal, que es asumida inconscientemente, tuvieron la capacidad de organizarse y mantener viva la lucha más trascendente de nuestro tiempo.

Como punto final, con la intención de construir una sociedad más justa, desde la academia podemos contribuir visibilizando y recuperando la participación política de e intelectual de las mujeres en las resistencias. Con ello rescataremos la memoria colectiva de quienes han asumido un papel transformador en la historia de las multidiversas sociedades y culturas.

Bibliografía

Aubry, A. (2011). Otro modo de hacer ciencia. Miseria y rebeldía de las ciencias sociales. En B. Baronet, B. M. Mora, y R. Stahler-Sholk, *Luchas "muy otras". Zapatismo y*



autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas (págs. 59-78). México, México: CIESAS, UAM, UNACH.

CNI. (17 de Septiembre de 2017). La Guerra Capitalista. Obtenido de CNI: <https://www.congresonacionalindigena.org/2017/09/17/la-guerra-capitalista/>

Coll Lebedebff, T. (2008). De la exclusión a la irrupción pública: el camino de los movimientos sociales en América Latina. En J. Fuentes Amour, & M. Gómez Malagón, *Problemas emergentes en el contexto educativo contemporáneo* (págs. 54-76). Ciudad de México: Universidad Pedagógica Nacional.

Cruz, L., & Marmolejo, T. (27 de Mayo de 2016). Por qué se movilizan. (S. d. Granados Cosme, Entrevistador)

Diario Oficial de la Federación. (26 de febrero de 2013). DOF: 26/02/2013. Obtenido de SEGOB-Diario Oficial de la Federación: <<https://bit.ly/3b6ytcu>>

Freedman, E., Barrera, Tomasino, E., y Payés, I. (2014). Mapeo de experiencias de educación popular con movimientos sociales. Lima, Perú: Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Obtenido de Biblioteca Virtual CLACSO: <<https://bit.ly/38hvzjd>>

García, Linera, Á. (2015). La Potencia Plebeya. Acción Colectiva e Identidades Indígenas, Obreras y Populares en Bolivia. México: Siglo XXI EditoresCLACSO.

Gluz, N. (2013). Las luchas populares por el derecho a la educación: experiencias educativas en movimientos sociales. Buenos Aires: CLACSO. Obtenido de Biblioteca Virtual CLACSO: <<https://bit.ly/3bbP1jp>>

Granados Cosme, S. d. (2018). *Movimiento popular contra la reforma educativa de 2013: organización, lucha y resistencia de las madres y los padres de familia de la CDMX*. Ciudad de Mexico: Tesis de licenciatura, Universidad Pedagógica Nacional.

Gutiérrez Aguilar, R. (18 de Octubre de 2014). Pensar y hacer Políticas en femenino. Puebla, Puebla, México. Obtenido de: <<https://bit.ly/2XbzVSv>>

Gutiérrez Aguilar, R. (2017). *Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas*. Madrid: Traficantes de Sueños .

Linares Arroyo, A. M. (14 de Agosto de 2016). Historia de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación. (S. D. Granados Cosme, Entrevistador)

Manzo, D. (15 de Febrero de 2016). Ixtepec: 10 años de clases bajo un árbol y en aulas de cartón. La Jornada, pág. 31.

Marx, C. y Engels, F. (2010). *Manifiesto del Partido Comunista*. (D. Álvarez Saldaña, Trad.) México: El Caballito.



Medina Melgarejo, P. y Rico Montoya, A. (2017). "Hacer-se de la CNTE..." Memorias disidentes en movimiento. En R. González Villareal, y G. Olivier, *Resistencias y alternativas. Reacción histórico-política de movimientos sociales en educación*. (págs. 101-124). México: Terracota.

Nuestra Voz Radio. (7 de Junio de 2016 a). Escuela a punto de desplomarse. Obtenido de: <<https://bit.ly/38iFqFv>>

_____ (24 de Junio de 2016 b). Familias en la junta del consejo escolar con maestros de la Escuela "Héroe Antonio Reyes". México. Obtenido de: <<https://bit.ly/3omtfGc>>

_____ (30 de Junio de 2016 c). Familias de la escuela "Hidroeléctrica de Cupatitzio". México. Obtenido de: <<https://bit.ly/2Lt4a56>>

_____ (4 de Julio de 2016 d). Familias del Jardín de Niños "Mozart". México. Obtenido de: <https://www.facebook.com/combatenvrmedioindependiente/videos/1758004931134331/>

Rauber, I. (2006). *Luchas y Organizaciones Sociales y Políticas: Desarticulaciones y Articulaciones*. México: UNAM.

Vladimir Ilich, L. (1961). *El Estado y la Revolución*. Moscú: Editorial Progreso.

Zibechi, R. *Autonomías y Emancipaciones. América Latina en movimiento*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Programa Democracia y Transformación Global.



As Manifestações Estudantis na Perspectiva do “Movimento Não Pago” em Aracaju - Se.

José Welington de Jesus

Resumo

Este artigo teve como objetivo compreender de que forma o “movimento não pago”, se autodenomina, de acordo com a sua classe social, dinâmicas e diretrizes internas. Levando-se como marco teórico numa perspectiva interacionista, além disso, em contrapartida, observar como as pessoas a ele exteriores os identifica, levando em consideração, se o movimento, alcançou algum êxito por meio das manifestações ocorridas em junho de 2013? Seus objetivos, e se a maior aparição na mídia, os trouxe uma maior aceitação ou negação por parte da sociedade?

Palavras chave

Juventude; Movimentos sociais; Classes; Estudantes.

Introdução

Inicialmente é importante destacar que o Movimento Não-Pago surgiu no início do ano de 2011, a partir da união de jovens estudantes e trabalhadores, em prol da melhoria das condições do transporte público coletivo. Possuindo como objetivo principal a luta a favor da tarifa zero. Além disso, eles apoiam e participam efetivamente de manifestações de distintos cunhos sociais, como mais recentemente, na luta juntamente com os agricultores, por melhores condições de trabalho.

As diretrizes que norteiam o movimento Não Pago são: Democracia e Horizontalidade: o movimento se constitui enquanto pólo militante organizado que busca a emancipação das pessoas através da mudança da realidade social do país e do mundo. Desse modo, embora alguns integrantes se destaquem pela experiência em movimentos sociais, todos possuem igual poder de decisão. Autonomia política: defendem que o movimento possua espaços próprios de discussões, formulação e deliberação política. Com isso não negamos as contribuições de outras organizações, nem somos contrários à participação de pessoas vinculadas às mesmas. Porém é fundamental que o movimento tenha autonomia para debater de maneira independente, (inclusive apresentando as divergências existentes), não ficando preso a qualquer tipo de organização, seja partidária ou não. A autonomia política deve ser também financeira. O financiamento recebido não pode, em hipótese alguma, comprometer as deliberações do movimento.



Do mesmo modo, não aceitam doações de entidades patronais. Sendo um movimento independente, não vinculado a partidos ou organizações. Classista e anticapitalista: Vivemos numa sociedade dividida em classes sociais e a história da humanidade tem sido, até então, a história da luta de classes. Diante disso, não podemos tomar uma postura “neutra”. No embate entre os que só têm a própria força para vender (trabalhadores) e os que detêm os meios necessários à produção de mercadorias (burguesia) o movimento se coloca ao lado dos explorados.

Para o movimento, a luta deve apontar necessariamente uma radical superação do sistema capitalista. É preciso romper com a lógica da produção voltada ao lucro e não às necessidades das pessoas. Também consideramos o combate às opressões, fundamental na construção de uma outra organização social, baseia-se na superação do modo de produção capitalista.

Aguns dos princípios acima mencionados advieram do antigo Movimento Passe-Livre, existente na cidade de Aracaju. Esse antigo movimento originou-se devido a influência de uma mobilização ocorrida em Salvador capital da Bahia. “Em 2003, milhares de jovens, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras fecharam as vias públicas, protestando contra o aumento da tarifa do transporte urbano. Durante 10 dias a cidade ficou paralisada. O evento foi tão significativo que se tornou um documentário chamado: “A revolta do Buzu”, de Carlos Pronzato.

Por isso, o Movimento Passe-Livre não deixa de ser uma base de direcionamento para o atual movimento existente em Aracaju. Que continua a defender igual posicionamento do movimento Passe-Livre, perante a legalização do transporte coletivo público, gratuito e de qualidade na capital sergipana.

Em 2018, o Movimento Não Pago completou 7 (sete) anos de existência. Entretanto, foi durante o ano de 2013 que ele obteve maior visibilidade social. Já que esse ano foi marcado por uma série de manifestações sociais, não somente em Aracaju, mas em várias capitais brasileiras, o que de certa forma, contribui de forma significativa para a maior aparição a respeito do Movimento Não Pago nos meios de comunicações locais e em massa.

O estopim das manifestações estudantis ocorreu no mês de junho de 2013, e coincidentemente, foi exatamente nesse momento em que os noticiários sobre o referido movimento, se tornaram mais frequentes, tanto nos jornais televisivos, quanto nos impressos. Sendo importante ressaltar, a grande divulgação que o meio virtual



possibilitou ao movimento, por meio dos portais jornalísticos, blogs e principalmente pelo Facebook, ferramenta utilizada para marcar encontros, eventos e propor debates.

Porém, embora os meios de comunicação de massa tenham propiciado um maior conhecimento da sociedade, sobre os objetivos e ideologias do movimento. As interrogativas que se seguem são as seguintes: Será que a aquisição dessa grande visibilidade gerou uma visão positiva ou negativa para as pessoas que são alheias ao movimento? Ou ainda, a forma como os integrantes do movimento se auto definem e o modo como os outros os definem, são semelhantes?

A resposta propõe uma dualidade. Já que a percepção do Movimento Não Pago será obtida através de uma visão externa e interna ao movimento. Nesse sentido, nos utilizaremos a partir de uma abordagem Interacionista, proposta pela escola de Chicago, na perspectiva ou relação (indivíduo-sociedade), bem como nos utilizaremos de conceitos sociológicos como Juventude e Interações no campo da sociedade.

Nesse sentido, faz-se necessário entender como o conceito de juventude toma lugar de extrema importância dentro desse grupo social, bem como eles significam, ressignificam e legitimam suas posturas, frente essas demandas que se apresentam no seu cotidiano diário.

Movimento estudantil: A juventude assumindo o seu papel na construção da sociedade

O movimento estudantil, diferentemente dos movimentos dos trabalhadores, é policlassista, visto que seus militantes são oriundos de diferentes classes sociais. Outra característica é a transitoriedade dos protagonistas, já que há constante renovação dos alunos nas instituições de ensino. No entanto, o movimento teve e tem um papel importante em momentos cruciais de transformação social.

Muitas ações estudantis são citadas desde o século XVIII, mas o movimento ganhou destaque a partir da segunda metade do século XX, em especial na década de 1960, quando se envolveu efetivamente em manifestações de massa em diferentes partes do mundo, enfrentando governos e lutando por transformações no sistema educacional e na sociedade.

As bandeiras de lutas pela liberdade e igualdade espalha-se pelo mundo na segunda metade dos anos 60, época das utopias revolucionárias, da revolução sexual, da música engajada, dos protestos contra a guerra no Vietnã, da primavera de Praga, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, do Maio de 1968 na França. Tudo isso ecoava no



Brasil, na luta contra a Ditadura Civil militar. Os estudantes foram um dos setores sociais mais aguerridos da resistência democrática dessa época.

O movimento estudantil brasileiro capitaneado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), participou ativamente da luta pelas reformas de base na primeira metade dos anos 1960 e da luta contra a ditadura a partir de 1964. Sofreu repressões, foi colocado na ilegalidade e teve muitos de seus líderes presos ou assassinados.

Assistimos nas últimas décadas, o movimento estudantil esteve presente em diversos momentos históricos da vida política brasileira (luta pela anistia dos presos políticos; Diretas já; Fora Collor; manifestações contra as privatizações). Em muitos outros países do mundo não tem sido diferente: os estudantes têm sido os protagonistas na defesa da democracia, dos direitos humanos e das minorias.

Vale salientar que em sua maioria, os novos movimentos sociais estão mais preocupados em garantir a consolidação de direitos aos grupos minoritários. Suas formas de atuação não envolvem políticas de cooperação com agências estatais ou mesmo com sindicatos. Preferem, muitas vezes, ações diretas que visam a mídia para ampliar seu público e, assim, mudar valores que reproduzem preconceitos e práticas discriminatórias e opressivas, manifestações de uma cultura que nega direitos básicos para grandes contingentes da população.

Como metodologia para nos utilizamos de questionários quantitativos no intuito de se fazer entrevistas com integrantes do “movimento não pago”, quanto com a sociedade em geral. Sendo que foram aplicados 18 questionários subjetivos com 8 perguntas formuladas, inclusive com 1 pergunta para a sociedade civil entre eles: professores universitários, funcionários públicos, estudantes das redes estaduais e municipais, como também, com outras instituições da sociedade.

Nesse sentido o “Movimento Não Pago” surge como protagonista dessa luta de classes por direitos mínimos frente às instituições sociais, no caso o órgão de gestão do sistema de transporte urbano. No desenvolvimento do trabalho foram realizadas diversas incursões nos locais, onde, supostamente os integrantes do movimento estivessem concentrados, embora encontrando dificuldades enormes no que diz respeito à obtenção e aplicação dos questionários, haja vista, que o movimento, encontra-se quase que praticamente em endereço virtual, ou seja, na internet. Contudo foram aplicados questionários a membros do movimento.



O intuito da aplicação dos questionários foi no sentido de se observar e entender como os diversos atores vêem o movimento, bem como, o próprio movimento se auto - definem, nos possibilitando uma análise, mas metódica e teórica.

Paralelo a tudo isso foram realizadas observações participantes nas últimas mobilizações no final de novembro e dezembro de 2018, sendo que uns desses eventos ocorreram no Terminal do centro da capital sergipana. Foram iniciadas as análises dos conteúdos dos questionários, inclusive com diversas discussões conjuntamente entre os participantes do grupo, e outras entidades envolvidas na luta pelo direito a uma passagem dentro da realidade dos estudantes, e pelo transporte de qualidade.

Vale salientar acerca da dificuldade encontrada em se localizar os principais integrantes do movimento “não pago”, devido a muitos deles estarem dispersos nos diversos espaços de mobilização, haja vista que as estratégias de mobilização são tomadas no mesmo local de mobilização.

Conclusão

Ao analisar os dados obtidos pela aplicação dos questionários, observou-se em sua grande maioria, que o movimento “não pago”, no que diz respeito como a sociedade o observa, ficou nítido certo apoio; em relação a mobilização, a sociedade classifica como legítimas suas reivindicações, quando se percebe os jovens como protagonistas desse ideário. No que diz respeito a estratégia de mobilização, 80% dos entrevistados não concordam com as depredações e depreciações do patrimônio público e privado. Como relata um entrevistado:

“Acho interessante ver a juventude ir para as ruas. Se unir e se mobilizar. Só assim as coisas podem mudar ou melhorar, algum dia. Concordo com a luta, mas não acho necessário o que fizeram no terminal DIA. Para mim, aquilo não é manifestação, mas vandalismo. Quanto à classe social deles, acho que é variada, têm ricos e pobres”.

Por outro lado, percebe-se também em 2% dos entrevistados que observam o movimento como sem um projeto estratégico que possibilite uma mudança na realidade da sociedade sergipana, como por exemplo: barateamento das passagens para trabalhadores de baixa renda, passe livre para estudantes, entre outras. Alguns não vêem o movimento com bons olhos. Como destacado:

“Eu sou contra! Eu apoio a luta por uma melhor qualidade do transporte público. Mas por uma tarifa zero, não. Imagine a bagunça que seria se ninguém pagasse nada. Ia ter gente pegando o ônibus para nada. O aperto e a bagunça seriam piores. E em minha



opinião, a maioria das pessoas que participam do movimento são "filhinhos de papai", metidos a revolucionários. Temos coisas mais urgentes para nos preocuparmos, como a educação".

Após o recebimento das respostas e uma análise dos temas e questões abordadas, percebe-se que embora o movimento "Não Pago" tenha alcançado mais integrantes devido ao maior aparecimento do mesmo na mídia. Em contrapartida, a forma como divulgaram as informações e noticiaram fatos a respeito do movimento, gerou pelo que aparenta, tendo como base as respostas colhidas, que as pessoas a ele exteriores não tiveram uma boa impressão do movimento. Ou não entenderam por falta de conhecimento e vínculo com o mesmo, os motivos pelos quais os integrantes do movimento Não Pago agiram de determinada forma.

Referencial Bibliográfico

Becker, Howard S. (1996) "A escola de Chicago". Conferencia. In: Mana vol.2 n. 2, Rio de Janeiro oct.

Bourdieu, Pierre. "A juventude é apenas uma palavra". In: Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, p.113.

Fortuna, Carlos. Imaginando a Democracia: do passado da sociologia ao futuro das cidades. EDUFS/2008.

Foote-White, William. (2005). "Sociedade de esquina: a estrutura social de uma pequena área pobre e degradada", Rio de Janeiro. Editora Zahar.

Goffman, Erving. (1980). "Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada". Rio de Janeiro: Zahar Editores,

Margulis, Mario; URRESTI, Marcelo. "La juventude es más que una palabra". In: Margulis, M. (org). La juventude es Más Que una Palabra. Buenos Aires: Biblos, 1996.

Internet

Princípios e Diretrizes do movimento Não Pago, em seu blog na internet, acessado em 08 de dezembro de 2018, às 15:45m. <http://movnaopago.blogspot.com/p/quem-somos.html>.

Noticiário: Revolta do Buzu: semelhanças e diferenças de dois movimentos que agitaram a cidade, matéria exibida no Jornal Correio da Bahia, acesso em 08 de dezembro de 2018 às 15:58hms no endereço: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/revolta-do-buzu-semelhancas-e-diferencas-de-dois-movimentos-que-agitaram-a-cidade/>.



Ocupação como aprendizado: Experiências de participação em ocupações de escolas no Distrito Federal em 2016.

Salles Dimitri Melo Oliveira

Resumo

Este trabalho tem como proposta realizar uma discussão sobre a temática das ocupações de escolas ocorridas em diversos estados do Brasil em 2016, refletindo sobre as possíveis interpretações desta forma de mobilização e engajamento coletivo. Busca-se apresentar eixos de discussão sobre a apropriação do modelo das ocupações, como repertório utilizado por grupos em contextos variados, com enfoque no caso das ocupações de escolas; sobre a noção de frames e como estes operam na inserção de atores em processos de ação coletiva; sobre a dimensão dos engajamentos individuais e as possíveis influências que condicionam a participação de sujeitos nesta forma específica de ação coletiva. Por meio da realização de entrevistas com estudantes que participaram das ocupações de escolas no Distrito Federal, foi buscada a valorização das interpretações dos sujeitos atuantes na mobilização, de modo a refletir sobre os sentidos atribuídos e a forma de interação destes no contexto da ação coletiva. A ênfase nas narrativas de experiência faz com que seja possível uma aproximação dos significados atribuídos às ocupações, assim como uma possibilidade de repensar as formas de interpretação deste tipo de ação no contexto brasileiro contemporâneo de movimentos sociais. São apontados argumentos que articulam a discussão teórica do repertório de ocupações, e como estas seriam preponderantes na inserção e na própria permanência dos sujeitos em mobilizações coletivas, por meio da criação de espaços de sociabilidade, afetividade, aprendizado e convivência.

Palavra chave

Movimentos sociais; Ocupação; Narrativas; Experiência; Escolas.

Introdução

O ano de 2016 foi palco de inúmeras manifestações em diversos lugares do Brasil, sendo que muitas tiveram como protagonistas estudantes secundaristas que se utilizaram de estratégias de ocupação de escolas e de construção coletiva de pautas e formas de ação. O Distrito Federal não esteve apartado de tais acontecimentos, sendo que ocorreram ocupações em escolas de várias regiões administrativas. As ocupações de escolas no Distrito Federal tiveram seu ápice no final do ano de 2016, quando



diversas escolas de ensino médio da rede pública e Institutos Federais foram tomados por estudantes mobilizados em torno de diferentes pautas, sendo algumas delas comuns a quase todas as ocupações: a oposição à chamada “PEC do Teto” (a hoje nomeada Emenda Constitucional 95/2016) e à Reforma do Ensino Médio. Junto a estas, eram comuns reivindicações voltadas a questões de estrutura física das escolas e maior representatividade de espaços como os grêmios estudantis (Tavolari *et al*, 2018).

O fenômeno das ocupações de escolas por estudantes secundaristas é relativamente novo no cenário brasileiro. As ocupações de 2015 tiveram início no estado de São Paulo, contra as medidas de reorganização propostas pelo governo paulista à época, tendo sucesso na conquista de suas demandas. A partir daí, entre o final de 2015 e meados de 2016, foram diversos os casos de ocupações de escolas com pautas locais: Goiânia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará, entre muitos outros (Tavares e Veloso, 2016; Real, 2017). Já no segundo semestre de 2016 ocorreu um ciclo de ocupações que teve uma pauta nacional mobilizadora: a resistência à Medida Provisória que instituiu a reforma do ensino médio, e também à PEC 241. Estas ocupações ocorreram com muita força, principalmente, no estado do Paraná, com mais de 850 escolas ocupadas (Dombrowski *et al*, 2017), mas também se espalharam por mais de 20 unidades da federação. Para delimitar o campo da discussão deste trabalho, foi feita escolha de investir na reflexão sobre as narrativas de experiência de alguns sujeitos que estiveram presentes em ocupações ocorridas no Distrito Federal em 2016, em um ciclo de protestos que se articulava a uma dimensão nacional de mobilizações, e situados em um local central para as discussões políticas do país.

Importante ressaltar que, de maneira alguma, considera-se que o repertório de ocupações seria uma novidade do ponto de vista de estratégias adotadas por movimentos sociais no contexto brasileiro; o que deve ser destacado é que esta forma de ação tem sido apropriada recentemente por movimentos estudantis, ainda que faça parte, historicamente, das formas de mobilização de diversos outros movimentos sociais (Bringel, 2009). Outra particularidade, no contexto deste trabalho, seria a investigação sobre a utilização do repertório de ocupações por parte de movimentos de estudantes secundaristas, e não universitários, fator que é pouco explorado, em âmbito brasileiro, nos estudos sobre movimento estudantil, em particular, e sobre movimentos sociais de maneira mais ampla (Tavolari *et al*, 2018).

O ponto central deste trabalho é a defesa da experiência enquanto categoria analítica. Com isto, pretende-se apontar para as possibilidades de pesquisa e compreensão das



formas de ação de movimentos sociais contemporâneos, como é o caso das ocupações de escolas ocorridas no Distrito Federal. Defende-se esta abordagem, visto que as narrativas possibilitam uma dinâmica de aproximação das questões e aprendizados vividos pelos sujeitos participantes. Além disso, o foco na experiência seria uma possibilidade de elaborar novas formas de entendimento acerca da ação dos movimentos sociais, assim como sobre a inserção de sujeitos em mobilizações e como estes significam esta participação.

Algumas considerações sobre a questão da experiência

Inicialmente, foi tomada como referência a noção de “experiência” a partir do que é sugerido por Cefaï (2009), ou seja, a experiência que existe a partir das interações entre os sujeitos, a partir de sua história de vida, em contato com os meios nos quais se insere. Esta é uma forma de se localizar no mundo e construir conhecimentos a partir dos próprios momentos de ação, “é um saber de experiência, forjado na sucessão de domínio e de perda de domínio sobre as situações, um saber ancorado nos corpos, que captam indícios e que os organizam, progressivamente, em configurações de sentido” (CEFAÏ, 2010, p. 72).

A proposta de Cefaï pela interpretação da experiência enquanto constituída a partir das interações com o meio e com as situações problemáticas que surgem está inserida nas discussões da chamada sociologia dos problemas públicos, na qual se destacam diversas produções recentes (Chateauraynaud, 2011; Cefaï e Terzi, 2012; Cefaï, 2017). Este campo de estudos destaca a centralidade da categoria de público, o qual está ligado em sua gênese à identificação de problemas, ou seja, distúrbios que afetam uma coletividade, e as questões que geram mobilização e ações específicas deste conjunto de indivíduos com vistas a resolver este problema. A partir deste processo de diálogo motivado por uma situação problemática, surgiria um conhecimento experienciado pela prática, na própria interação dos sujeitos entre si e com o meio e as vicissitudes do cenário em questão. Nas palavras de Cefaï:

Esse trabalho de definição da situação problemática envolve um esforço de resolução: os atores não são movidos por uma intenção de “saber por saber”, mas de saber na medida em que esse saber confere um poder de ação: “Doing is knowing, knowing is doing” (“Fazer é saber, saber é fazer”) (Cefai, 2017, p. 189).

A experiência, portanto, cresce a partir das atividades e práticas. Esta abordagem sobre a questão da experiência é central para a discussão deste trabalho, por destacar o elemento formado na ação coletiva, simultaneamente ação e aprendizado. Entende-se



que, ao utilizar esta definição, é possível ressaltar a dimensão dos conhecimentos que são construídos no decorrer de uma ação, sendo criado e recriado constantemente. O caso estudado das ocupações do DF, por meio das narrativas dos entrevistados, nos possibilita perceber as situações e elementos particulares que envolvem a inserção de um sujeito em uma dinâmica de protesto, sendo necessária a adaptação constante deste para responder aos problemas surgidos nas escolas, durante a interação com os outros participantes da mobilização e também com seus opositores.

Logo, se existe uma dimensão de aprendizado de práticas a partir das experiências de participação em ocupações de escolas, esta é passível de ser manifestada pelos sujeitos que ali se mobilizaram, expressando-se pelas narrativas e comunicando elementos comuns aos diversos contextos de escolas que foram palco de ocupações. Com isto, não se pretende afirmar uma capacidade de generalização de interpretações sobre as ocupações ocorridas no DF em 2016, mas é possível apontar para alternativas que contribuam para a ampliação dos conhecimentos construídos sobre estes tipos específicos de ação coletiva recentemente observados. Faz-se necessário, portanto, discutir em que medida a noção de experiência, como definida aqui, pode ser trabalhada frente aos conceitos principais utilizados para este trabalho.

Repertório e experiência

A utilização da categoria de experiência frente à de repertório pode, segundo se defende neste trabalho, contribuir para o estudo de movimentos sociais em alguns aspectos. Primeiramente, deve-se destacar que o conceito de repertório, aqui articulado a partir de sua definição aproximada à dimensão performática (Tilly, 2008), pode ser discutido pelo viés dos aprendizados associados à colocação em prática de uma forma de ação específica: “repertórios são aprendidos durante performances confrontacionais – só se aprende a marchar, marchando – e performances modificam os repertórios, contínua e incrementalmente” (Alonso, 2012, p. 31). Apesar disto, permanece em questão a forma de apropriação destes conjuntos simbólicos de tecnologias e conhecimentos de formas de ação por parte dos indivíduos mobilizados. Um repertório, enquanto conceito, expressa certa dimensão estrutural e histórica (Alonso, 2012), devendo ser articulada a outras categorias de modo a situar a discussão, levando em consideração as formas como os sujeitos se apropriam destas formas de ação.

Pensando na questão das ocupações aqui tratadas, argumenta-se que a aplicação do conceito de repertório deve ser combinada à reflexão sobre a prática das ocupações enquanto elemento inserido em um contexto de debate público. Isto se daria por meio



de uma valorização da performance e do improviso, visto que muitas das ocorrências de ocupações de escolas se deram pela atuação de sujeitos que não haviam se envolvido em situações de mobilizações coletivas anteriormente. Se há um aspecto de aprendizado de práticas, há que se perguntar em que sentido se dá este aprendizado, e como as práticas são modificadas a partir dele. Assim, a mera identificação de repertórios enquanto performances diria pouco, efetivamente, sobre as práticas e subjetividades envolvidas nas experiências dos atores em mobilização. Deve-se buscar, portanto, maior detalhamento no que diz respeito às discussões teóricas para buscar diálogo com a situação verificada no caso empírico das ocupações. As análises de protestos a partir de uma discussão “performática” são essenciais para identificar as formas de ação de determinados grupos ou como se dá a utilização de repertórios específicos, como feito por Dowbor e Swako (2013). O que se sugere, no entanto, é a abordagem que acompanhe os sujeitos, suas práticas e aprendizados no contexto dos protestos, sendo afetados pelos repertórios e afetando-os, influenciando nas ações construídas coletivamente.

Chama a atenção o fato de que as condições de apropriação dos repertórios de ação coletiva, como no caso das ocupações, se manifestem principalmente por uma adoção de um roteiro relativamente definido, ainda que os protestos estudados sejam a primeira mobilização de alguns dos entrevistados. Cefaï define repertórios de ação como conjuntos acumulados de conhecimento, simbolismo e tecnologias que são mobilizados pelos atores de modo a dar forma a suas identidades e reivindicações (CEFAÏ, 1998, p. 143). As ocupações, com todas as suas atividades e organização, seriam um exemplo de conjunto como este, com o qual os estudantes entram em contato na própria participação. O aprendizado das formas de ação se dá, portanto, durante a própria ação, sendo esta contingente e inserida em um conflito no qual diversos sujeitos interagem. O saber agir, portanto, só é possível por meio de uma experiência específica, voltada à ação e informada pelos elementos discursivos e simbólicos associados ao conflito ou, nos termos de Cefaï (1998), ao problema público.

A experiência vivida nas ocupações, e narrada pelos entrevistados posteriormente, serve para uma aproximação da dimensão prática do aprendizado da forma de ação da ocupação. Especialmente no caso estudado, quando ocorreu em grande medida o primeiro contato de muitos dos estudantes com uma discussão política de ação coletiva, estas práticas servem como referências posteriores, construindo um acumulado de saberes que podem servir para outros contextos de protesto e mobilização. Defende-



se, portanto, que a análise das narrativas de experiência possa contribuir: para ampliar o conhecimento acerca das formas de apropriação dos repertórios de ação, especialmente por sujeitos com pouca ou nenhuma experiência de engajamento anterior; para compreender a inserção de sujeitos em contextos que apresentam formas de ação rotinizadas para um conflito político, como as ocupações, e suas interações neste tipo de conjuntura; e para perceber como os repertórios são performatizados, improvisados e transformados, adquirindo características particulares em cada caso. A fala que melhor expressa esta questão, entre as narrativas dos entrevistados, é aquela que fornece uma definição das ocupações como instrumento de mobilização, e não como forma de conquista concreta de uma reivindicação: esta interpretação é informada pela própria experiência do sujeito durante as ocupações. Portanto, a ênfase na experiência serve para destacar como os indivíduos se situam no contexto da utilização de um repertório por movimentos sociais. Esta discussão, em conjunto com as reflexões discutidas a seguir, podem fornecer pistas para a compreensão sobre as formas como a participação em uma ação coletiva afeta os indivíduos.

Frames e experiência

A discussão sobre *frames*, e como estes podem ser trabalhados junto à categoria de experiência, são outro elemento importante para o argumento deste trabalho. Trindade (2017), discutindo a questão das ocupações urbanas e sua dimensão simbólica, sugere a utilização do conceito de *frames* para a compreensão da ação de movimentos sociais, de modo a dar destaque para a atividade interpretativa realizada pelos sujeitos mobilizados. De fato, a categoria de *frames* serve para o estudo dos simbolismos e das disputas de interpretação de movimentos como os de ocupação, visto que aponta para as dimensões discursivas que servem tanto para a mobilização de atores para a participação quanto para a divulgação das ações dos protestos ou movimentos sociais. No entanto, seguindo o argumento de Polletta (2006), os *frames* nem sempre podem ser facilmente identificados, sendo a sua delimitação por vezes uma tarefa metodologicamente complicada.

Os *frames* são essenciais enquanto categoria analítica, pois expressam dimensões de discursos e interpretações de situações de conflito, e também aspectos simbólicos e afetivos das expressões de ideologias ou formas de cultura política expressadas pelos atores (Cefaï, 1998). Estes discursos, no entanto, podem ser melhor identificados em uma dimensão situada, em que seja possível perceber a forma como os sujeitos entram



em contato com estas formas de interpretação e como auxiliam na construção de compreensão da situação problemática em questão.

Defende-se que, em uma tentativa de avançar nas elaborações possíveis sobre os movimentos contemporâneos, seja dado maior destaque às possibilidades trazidas pela experiência, entendida como um saber construído na própria prática. Combinando a dimensão discursiva ou simbólica aludida pelos *frames* com uma discussão de aspecto relacional, observando a construção de práticas e saberes que estão imbricadas nos protestos e mobilizações, seria possível construir possibilidades de reflexão sobre movimentos sociais de maneira geral. Em outras palavras, a proposta aqui defendida é pela combinação dos aspectos interpretativos abarcados pela categoria de *frame*, em conjunto com um olhar situado acerca da experiência enquanto prática, considerando que os discursos ou ideologias políticas apenas ganham forma quando entendidos nos momentos de prática dos sujeitos, tendo como referenciais as questões simbólicas, mas constantemente contribuindo para construí-las e transformá-las.

A experiência como dimensão situada, vivenciada e construída a partir de dinâmicas específicas de conflito, se relaciona com os discursos e simbolismos que afetam a forma como os indivíduos percebem as ações de um movimento. Durante as ocupações, este conjunto de discursos se traduziu como uma espécie de defesa da educação pública, por meio de ações de valorização do espaço físico das escolas, assim como a sua resignificação por meio da realização de saraus, aulas públicas e do cuidado coletivo com o espaço. Os *frames*, enquanto caracteres interpretativos de determinada ação, servem para construir uma imagem junto à opinião pública, assim como para agregar sujeitos à ação coletiva. O enquadramento interpretativo de defesa da educação pública certamente foi determinante para a participação de muitos dos sujeitos entrevistados, como se verifica em suas próprias narrativas. No entanto, o que se pode agregar à discussão dos *frames*, neste caso específico das ocupações, diz respeito à forma como estes sujeitos entram em contato com os discursos, e como se apropriam desta forma de justificação das ações.

Decerto que a participação é influenciada por fatores diversos, mas depreende-se das entrevistas que é possível que a mobilização preceda a assimilação dos discursos pelos quais as ações coletivas são defendidas. A inserção dos estudantes em grupos de convivência que tem interesse em discussões políticas, assim como a influência de pessoas específicas para o início da participação, como apontado por alguns entrevistados, são fatores mobilizadores que podem ter papel preponderante para a



formação da argumentação e justificação de defesa da pauta das ocupações. Em outras palavras, a opção por utilizar a categoria de experiência, como definida nesta dissertação, auxilia na pesquisa que tenha como intenção compreender ou descrever as formas pelas quais um conjunto de discursos são articulados por determinados sujeitos para interpretar uma ação coletiva. A experiência, portanto, serve para situar as condições de formação ou de difusão de enquadramentos de interpretação dos movimentos sociais, permitindo que estes sejam mais facilmente identificados nas narrativas dos participantes das ocupações.

Engajamento e experiência

Em relação à temática do engajamento, a contribuição de um enfoque na dimensão da experiência também pode ser apontada, considerando principalmente a inserção e a participação efetiva dos sujeitos em ações coletivas. Os estudos sobre engajamento, frequentemente, invocam uma dimensão biográfica, na qual são investigadas esferas de vida, redes de relacionamento e alfabetização política, para discutir as possibilidades de formação de uma identidade militante (Passy e Giugni, 2000; Passy e Monsch, 2014; Real, 2017). Há uma preocupação com “carreiras” militantes (Fillieule, 2001), observando os processos de seleção e recrutamento, de aproximação e socialização políticas relacionados a um tipo de participação específico, o engajamento militante propriamente dito.

Obviamente, existe uma preocupação de realizar a conexão entre trajetórias individuais e coletivas; segundo Sawicki e Siméant (2011), os estudos sobre engajamento militante devem concatenar as duas discussões, tanto no âmbito da trajetória individual quanto dos coletivos ou organizações investigadas. No entanto, por se tratar de uma abordagem que enfoca uma dimensão processual, deve-se ter em conta as dificuldades de delimitar um evento específico, como no caso das ocupações, apresentando-as a partir dos sentidos a ela associados e construídos durante a própria ocorrência das ações. A abordagem do engajamento militante oferece ferramentas analíticas que buscam observar as interrelações das dinâmicas individuais e das organizações militantes, como estas trabalham os indivíduos e são por eles trabalhados (Sawicki e Siméant, 2011). Um protesto como as ocupações, podem ser significativas para a trajetória de alguns sujeitos, mas não de outros; observar apenas os processos e as condições de trajetórias dos indivíduos tira a possibilidade de perceber as mobilizações em si, como momentos com lógicas próprias, constituindo elementos de novidade e sendo constituídas por sujeitos diversos, tenham eles uma “identidade militante” ou não.



O elemento que talvez seja perdido, ao optar pela abordagem que ressalta o engajamento, é a dimensão da experiência comum que é constituída a partir da participação em uma mobilização ao redor de um problema. Ou seja, a própria situação é constituinte da experiência, sendo afetada pelos sujeitos e afetando os diferentes sujeitos de maneiras diversas.

Ao trazer a dimensão da experiência, é possível complexificar este resgate biográfico, fazendo com que os sujeitos não sejam aproximados apenas a partir da imagem de militantes, constituindo muitas vezes uma espécie de objetificação ou mesmo de simplificação das trajetórias de vida. Os indivíduos, especificamente aqueles vistos como “militantes”, são sujeitos complexos inseridos em redes de interação e convívio múltiplas, não podendo ser reduzidos à dimensão militante verificada por meio dos processos de pesquisa (Rosa, 2011). A busca pelos diferentes significados de um evento de mobilização é beneficiada por um conceito como o de experiência, que dá destaque às formas de aprendizado vividas pelos militantes. O ponto que se defende, neste trabalho, é o de colocar em questão a experiência enquanto momento criativo e formativo, afetando de maneiras diferentes os sujeitos que tomam parte do problema público, identifiquem-se estes como militantes ou não.

A intenção principal, ao ressaltar a experiência como formadora de formas de ação, subjetividades e condições de participação em ações coletivas, é principalmente a de tomar as narrativas dos sujeitos enquanto repletas de significados e reflexões que, por si mesmas, podem contribuir para avançar na compreensão da forma de ação de movimentos sociais. Há que se evitar a forma de construção de conhecimento que trata a realidade social como traduzível para determinados conceitos específicos, que auxiliariam na sua explicação. Assim, ao tomar a discussão sobre o engajamento militante dos indivíduos, defende-se que uma forma de evitar que a discussão recaia em uma construção de narrativa que visualize nas ações dos sujeitos apenas o que é justificável teoricamente, seria exatamente dar primazia à expressão das narrativas das próprias experiências dos sujeitos. Desta maneira, defende-se que é possível construir novas abordagens para a construção de conhecimentos sobre as ocupações.

Trata-se de uma fonte de discussões em aberto, da mesma maneira que se dão as experiências de mobilização: nem sempre lineares, mas sempre carregadas de significados, sentimentos e reflexões múltiplas. Entende-se que as narrativas sobre as ocupações se encaixam nesta forma de percepção do que seria uma mobilização, especialmente quando os entrevistados se referem aos ganhos que teriam tido por



ocupar as escolas. Estes não seriam apenas em relação à esfera da militância, mas ganhos e aprendizados que se manifestam em diversas esferas de vida, como interesses de estudo e de atuação profissional.

O conceito de experiência para o estudo de movimentos sociais

Em grande medida, utilizar o conceito de experiência a partir de uma definição calcada em práticas e informada pelas ações dos sujeitos traz a possibilidade de estabelecer um diálogo entre muitas discussões recorrentes no campo dos estudos de movimentos sociais. Seguindo a proposta deste trabalho, defende-se que a experiência pode servir como forma de articular as categorias utilizadas por este trabalho, sendo simultaneamente elaboração teórica e ferramenta metodológica. Utilizando a noção de repertórios, entendidos enquanto performances; *frames*, o conjunto de significados e simbolismos produzidos no decorrer da ação coletiva, e que moldam percepções de mundo; e engajamento, expressando as trajetórias individuais dos atores mobilizados, buscou-se uma maneira de organizar todas estas discussões a partir do contato com as narrativas dos sujeitos que participaram das ocupações. Ao colocar a dimensão da experiência enquanto o elemento central da reflexão a ser construída, seria possível estabelecer um diálogo a partir da dimensão abrangente de formas de ação subsumida no conceito de repertório, identificando como estes repertórios operam na construção de enquadramentos e afetam as subjetividades e como estas experiências se refletem nas escolhas, práticas e trajetórias dos indivíduos. O principal, talvez, seja o elemento de aprendizado associado à questão da experiência, sendo assim uma maneira de realizar a aproximação às vivências dos sujeitos ao longo dos protestos investigados.

As ocupações, enquanto forma de ação de movimentos sociais, tiveram diversas formas de utilização ao longo da história, sendo utilizadas por muitos grupos, ainda que seja significada de maneira particular de acordo com o contexto, gerando interpretações e discursos que afetam as experiências dos militantes. Sendo caracterizada pela entrada e permanência em espaço público ou privado com vistas a questionar o poder estabelecido ou reivindicar alguma forma de mudança social, política ou econômica (Palacios-Valladares, 2016), a ocupação teria se verificado de maneira mais recorrente em protestos ao redor do mundo a partir dos anos 2000 (Aitchison, 2011; Schwartz-Weinstein, 2013). Estas foram frequentes na presente década, com a emergência da Primavera Árabe, os Indignados da Espanha e o Occupy Wall Street nos Estados Unidos (Castells, 2013); e no Brasil, com as Jornadas de Junho de 2013 (Mendonça, 2018). Além destes, destacam-se os movimentos de ocupações de universidades em



diversos países (Bringel, 2009; Aitchison, 2011; Guzman-Concha, 2012; Palacios-Valladares, 2016; Fleet e Guzman-Concha, 2016; Ivancheva, 2017; Donoso, 2017), e também as ocupações secundaristas ocorridas no Chile em 2006 (Zibas, 2008; Aitken, 2014). O estudo sobre a Primavera Secundarista, por meio do recorte apresentando anteriormente, dialoga com este amplo campo de produções sobre ocupações como repertório de ação de movimentos sociais.

A análise das narrativas aponta para algumas questões a serem destacadas como as principais contribuições da pesquisa desenvolvida nesta dissertação. Ao dialogar com os participantes das ocupações, foi possível identificar os elementos comuns aos repertórios utilizados nas ocupações estudantis pelo Brasil, especialmente a partir de formas recorrentes de organização dos coletivos responsáveis pelas ações, assim como a divisão de tarefas em comissões e a característica das decisões tomadas em espaços de discussão horizontalizada. Certo é que, se não é possível afirmar diretamente uma linha de influências nas formas de ação em relação a movimentos estudantis ocorridos no Chile, como feito por Campos *et al* (2016), tampouco esta influência pode ser descartada; no entanto, no que diz respeito à difusão da forma de ação de ocupação de escolas, o principal elemento imagético e discursivo foram os protestos ocorridos em outros estados, com os quais os sujeitos entrevistados demonstraram identificação e expressaram a necessidade de participação das comunidades de estudantes no âmbito do DF. Assim, se coloca a questão: as formas de se relacionar, em uma pesquisa ou trabalho acadêmico, protestos ocorridos em diferentes lugares do mundo, passa também por uma construção de narrativa sobre a ação, relação e influência dos movimentos em escala global. Muitas das vezes estas narrativas podem trazer elementos importantes para o entendimento de ações transnacionais ou da difusão de repertório e estratégias, mas há que se fazer a ressalva, acompanhando o argumento de Gagyí (2012), de que se deve sempre buscar identificar as diferenças de posicionamentos geopolíticos dos movimentos. Desta forma, seria possível a apontar semelhanças e diferenças, aprofundando o entendimento das narrativas de interpretação dos movimentos e suas interações.

Outra questão importante é a dimensão do aprendizado dos discursos e práticas de participação política em movimentos e protestos, que se desenvolve em conjunto com os elementos de questionamento de padrões e situações identificadas como injustas na sociedade. Explica-se: alguns entrevistados afirmaram que tiveram contato com discussões sobre as temáticas de reivindicação, associadas a questões jurídicas e



legislativas, durante as próprias ocupações. Além disso, temas variados, como discussões sobre questões de gênero, feminismo, raça e opressões sociais também foram apontados como alguns dos aprendizados que ocorreram no contexto das ocupações. Entende-se que isto expressa a condição formativa das participações neste tipo de ação coletivo, posto que se baseia não apenas na permanência em um local determinado, mas também na possível resignificação deste local (TRINDADE, 2017). Muitas das questões apontadas como transformadoras pelos entrevistados são, por vezes, pouco trabalhadas no cotidiano das próprias escolas, seja pelos docentes quanto entre os próprios estudantes. A ocorrência de uma ocupação, em um contexto em que isto ocorria simultaneamente em vários estados do Brasil, possibilitou a grande emergência de debates e um preparo discursivo para a defesa das próprias ocupações nas quais estes sujeitos se encontravam presentes. As narrativas possibilitam, portanto, identificar alguns momentos que podem ter servido como formação ou alinhamento dos elementos interpretativos que fazem parte dos discursos de defesa da ação das ocupações.

As ocupações devem ser encaradas, a exemplo do que afirma Aitchison (2011), simultaneamente como “processo” e “protesto”, no sentido de que são tanto ação inserida em um contexto mais amplo de disputas e conflitos, mas também são prefigurações de relações buscadas pelos participantes. Isto pode ser utilizado para compreender a forma como as ocupações aconteceram no DF, mas principalmente para discutir as experiências narradas pelos entrevistados, especialmente relacionado à discussão dos resultados das ocupações. Foi comum, ao longo das entrevistas, o posicionamento de apontar as ocupações como momentos importantes de mobilização, aprendizado, criação e fortalecimento de vínculos entre os estudantes, e como um espaço capaz de gerar transformação em relação a formas de ação e visões de mundo. Portanto, mesmo que inseridas num quadro amplo de protestos por todo o Brasil, as ocupações foram momentos particulares que, em si mesmos, trouxeram transformações, mesmo que não aquelas apontadas como as pautas de reivindicações. Nisto, deve-se refletir como é aferido o “sucesso” ou “fracasso” de uma mobilização nos estudos de movimentos sociais: os próprios sujeitos entrevistados consideram que as ocupações, ainda que sem conquistar as suas demandas, foram bem-sucedidas ao possibilitar que grupos de estudantes pudessem ter contato com discussões políticas. Mais do que isto, foi levantada a hipótese, por um dos estudantes, de que o objetivo das ocupações seria o de gerar mobilização, e não o de conquistar demandas. Não necessariamente isto pode ser generalizado, mas é um ponto de particular interesse



para as discussões no contexto deste trabalho. Retomando o título deste trabalho, fica explicitada a principal questão a ser destacada das narrativas: ocupar é aprender, e este aprendizado, suas condições e as formas como afetam os sujeitos são o centro do argumento deste trabalho.

Considerações finais

Tomando o caso empírico apresentado ao longo deste trabalho, entende-se que a maior parte das ocupações ocorridas no Distrito Federal não foram bem-sucedidas, ao menos não no sentido de atendimento de reivindicações feitas pelos estudantes. Pelo contrário, as principais questões que mobilizaram os discursos dos presentes nas ocupações se resolveram de maneira contrária ao demandado pelos movimentos ocorridos. Mesmo no que diz respeito às pautas locais de estrutura das escolas, poucas foram aquelas que efetivamente foram conquistadas a partir dos processos de ocupação. O que se verificou junto aos participantes das ocupações foi, por outro lado, uma avaliação recorrente da importância da mobilização ocorrida, no sentido de que esta não teria sido determinada apenas pela falta de resultados concretos. As ocupações serviram para expressar uma visão de mundo no contexto social, ou seja, da importância da manifestação de jovens estudantes em relação à política e a questões sociais diversas. Além disso, também serviram para trazer um acúmulo de aprendizados para os sujeitos envolvidos, que modificam, segundo os mesmos, as próprias ações e formas de se situar na sociedade e de atuar a partir do local em que se encontram. Nesse sentido, pode-se falar de um aspecto diferenciado de sucesso das ocupações: estas se tornariam em espaços de mobilização e aprendizado, e serviriam como portas de entrada no campo de ações de protestos e movimentos sociais.

As condições pelas quais os sujeitos expressaram as suas experiências, refletindo sobre as suas vivências e expondo as suas interpretações dos acontecimentos são exemplos do que se pode conseguir com a abordagem das narrativas: a partir dos relatos situados de indivíduos específicos, é possível construir conhecimentos sobre as formas de ação, as condições de discussão e significação, e sobre os aspectos de inserção de sujeitos nos movimentos sociais ou protestos. Esta é, em suma, uma forma de buscar um conhecimento localizado, e mais, vivido e gerado no decorrer da própria ação coletiva, de modo a refletir de que forma estes conhecimentos podem auxiliar na discussão das próprias formas de categorização e conceituação dos movimentos sociais. A partir do momento em que se busca estabelecer esta forma de diálogo, defende-se que podem



ser criadas ferramentas que auxiliem na ampliação do conhecimento sobre a ação coletiva.

Retomando Cefaï (2010), entende-se que o saber da experiência é tomado aqui como o saber da ação, e esta ação é tomada em um contexto social, informada pelas discussões e debates do momento, passível de construções e mudanças potencialmente múltiplas, afetando os sentidos e tendo influências em relação a escolhas e trajetórias de indivíduos. Os procedimentos realizados ao longo da pesquisa que embasou este trabalho se caracterizaram por um esforço de retomar as experiências e tratá-las como a fonte principal das reflexões construídas. Desenvolver o estudo das experiências de participação em movimentos sociais, feito por meio de narrativas dos próprios sujeitos engajados, é principal ponto que este trabalho busca defender, de modo a dialogar com o conjunto das produções recentes sobre ocupações e sobre a ação coletiva contemporânea no Brasil.

Referências bibliográficas

- Aitchison, Guy. Reform, Rupture or Re-Imagination: Understanding the Purpose of an Occupation, *Social Movement Studies*, 10:4, 431-439, 2011.
- Aitken, Stuart. Do apagamento à revolução: o direito da criança à cidadania/direito à cidade. *Educ. Soc.*, Campinas, v. 35, nº. 128, p. 629-982, jul.-set., 2014.
- Alonso, Angela. Repertório, segundo Charles Tilly: história de um conceito. *Sociol. Antropol.*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 21-41, Junho 2012.
- Bringel, Breno. O futuro anterior: continuidades e rupturas nos movimentos estudantis do Brasil. *Eccos - Revista Científica*, Vol. 11, Núm. 1, enero-junio, 2009.
- Campos, Antonia M.; Medeiros, Jonas; e Ribeiro, Márcio M. *Escolas de luta*. São Paulo: Veneta, 2016.
- Castells, Manuel. *Redes de indignação e de esperança: movimentos sociais na era da internet*. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
- Cefaï, Daniel. Making Sense of Politics in Public Spaces: Phenomenology of Political Experiences and Activities. In: *Schutzian Social Science*, L. Embree (ed.), Den Haag, Kluwer Editions, p.135-157, 1998.
- Cefaï, Daniel. Como nos mobilizamos? A contribuição de uma abordagem pragmatista para a sociologia da ação coletiva. *Revista Dilemas*, v. 2, n. 4, 2009.
- Cefaï, Daniel. Provações corporais: uma etnografia fenomenológica entre moradores de rua de Paris. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, (79), 71-110, 2010.



Cefaï, Daniel. Públicos, Problemas Públicos, Arenas Públicas... O que nos ensina o pragmatismo (Parte 1). *Novos estudos CEBRAP*. São Paulo, v. 36.01 p. 187-213, março, 2017.

Cefaï, Daniel; Terzi, Cédric. *L'expérience des problèmes publics*. Paris: Perspectives Pragmatistes, 2012.

Chateauraynaud, Francis. *Argumenter dans un champ de forces. Essai de balistique sociologique*. Paris: Petra, 2011.

Dombrowski, Osmir; Minucelli, Conrado Pereda; Santos, Jaqueline Aparecida Alves dos. #OcupaParaná – a primavera paranaense. In: 18º Congresso Brasileiro de Sociologia. Anais (on-line). Brasília, 2017. Disponível: <<http://sbs2017.com.br/anais/resumos/PDF-eposter-trab-aceito-0324-1.pdf>> Acesso em 01/12/2017.

Donoso, Sofia. “Outsider” and “Insider” Strategies: Chile’s Student Movement, 1990–2014. In: Donoso, Sofia and Von Bülow, Marisa (org.). *Social Movements in Chile: organization, trajectories and policial consequences*. Palgrave Macmillan, 2017.

Dowbor, Monika; Szwako, José. Respeitável público...: performance e organização dos movimentos antes dos protestos de 2013. *Novos estud. - CEBRAP*, n. 97, p. 43-55, 2013.

Fillieule, Olivier. Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel: post scriptum. *Revue Française de Science Politique*, 51(1-2):199-215, 2001.

Fleet, Nicolas; Guzmán-Concha, César. Mass Higher Education and the 2011 Student Movement in Chile: Material and Ideological Implications. *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 36, No. 2, pp. 160–176, 2017

Gagyi, Agnes. Occupy Wall Street? Position-blindness in the New Leftist Revolution. *Journal of Critical Globalization Studies*, 5, pp. 143–148, 2012.

Guzmán-Concha, César. The Students’ Rebellion in Chile: Occupy Protest or Classic Social Movement?, *Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest*, 2012.

Ivancheva, Mariya P. The Discreet Charm of University Autonomy: Conflicting Legacies in the Venezuelan Student Movements *Bull Lat Am Res*, 36: 177–191, 2017.

Mendonça, Ricardo Fabrino. Dimensões democráticas nas Jornadas de Junho: reflexões sobre a compreensão de democracia entre manifestantes de 2013. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 33(98), e339707. Epub April 16, 2018

Palacios-Valladares, Indira. Protest communities and activist enthusiasm: student occupations in contemporary Argentina, Chile and Uruguay. In: *Interface: a journal for and about social movements*. Vol. 8 (2): i-iv. Nov. 2016.



Passy, Florence. & Giugni, Marco. Life-sphere, networks, and sustained participation in social movements: a phenomenological approach to political commitment. *Sociological Forum*, 15, 117–144, 2000.

Passy, Florence & Monsch, Gian-Andrea. Do social networks really matter in contentious politics? *Social Movement Studies*, 13 (1), 22–47, 2014.

Polletta, Francesca. *It Was Like a Fever: Storytelling in Protest and Politics*. The University of Chicago Press, 2006.

Polletta, Francesca; CHEN, Pang Ching Bobby; GARDNER, Beth Gharrity; Motes, Alice. The Sociology of Storytelling. *Annual Review of Sociology* 37: 109–130, 2011.

Real, Daniely da Costa Vila. *Primavera Secundarista: Engajamento Estudantil nas Ocupações de Vitória – ES em 2016*. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017.

Rosa, Marcelo C. Mas eu fui uma estrela do futebol! As incoerências sociológicas e as controvérsias sociais de um militante sem-terra sul-africano. *Mana*. Rio de Janeiro, v. 17, n.2, pp. 365-394, ago. 2011.

Sawicki, Frédéric; Siméant, Johanna. Inventário da sociologia do engajamento militante: nota crítica sobre algumas tendências recentes dos trabalhos franceses. *Sociologias*, v. 13, n. 28, p. 200-255, 2011.

Schwartz-Weinstein, Zach. *Not Your Academy: Occupation and the Futures of Student Struggles*. Nova Iorque: Columbia University Academic Commons, 2013.

Tavares, Francisco Mata Machado; Veloso, Ellen Ribeiro. “A gente ainda nem começou”: repertórios de confronto político nas escolas ocupadas em Goiânia (2015). 10º Encontro da ABCP: “Ciência Política e Política: Memória e Futuro”. Belo Horizonte, 2016.

Tavolari, Bianca; Lessa, Marília Rollemberg; Medeiros, Jonas; Melo, Rúrion; Januário, Adriano. As ocupações de escolas públicas em São Paulo (2015-2016): Entre a posse e o direito à manifestação. *Novos estudos CEBRAP*, 37(2), 291-310, 2018.

Tilly, Charles. *Contentious performances*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Trindade, Thiago Aparecido. O que significam as ocupações de imóveis em áreas centrais? *Caderno CRH*, Salvador, v. 30, n. 79, p. 157-173, Jan./Abr. 2017

Zibas, Dagmar M. L. “A Revolta dos Pingüins” e o novo pacto educacional chileno. *Revista Brasileira de Educação*. v. 13 n. 38 maio/ago. 2008.



Acción colectiva, resistencia y lucha.

Las voces del 68 mexicano.

Maria Guadalupe Membrillo Carrera
Susana Torres Ortiz¹

Resumen

Objetivo: Analizar cuáles fueron los desafíos para permanecer en la resistencia social; Explicar la organización después de las represiones de 1968 y 1971; y reconocer los horizontes vistos en los movimientos sociales del presente. Problemática: Los movimientos ocurridos en la década de los años 60, fueron consecuencia del hartazgo por parte de jóvenes que crecieron en un contexto de poca certeza; La necesidad de comenzar su quehacer como seres políticos era urgente. Se necesitaba un cambio, ya que existían cuestionamientos alrededor del mundo sobre lo que se estaba haciendo, sobre lo que estaba ocurriendo.

Metodología: interdisciplinaria (historia y sociología). Resultados: Es importante un acercamiento a los veteranos del 68, hablar con ellos y ellas acerca de la juventud actual ya que aquel movimiento llevado a cabo en México entre 1967 y 1971 cambio la concepción que se tenía de ser joven estudiante.

Discusión: Podemos analizar las categorías, adjetivos y contextos pertenecientes a la época, existe una gran complejidad de la protesta social y la acción colectiva, ya que esta es producida por encuentros y desencuentros, tanto de carácter político e ideológico. Conclusiones: Myrthokelia Gonzalez, Sergio del Rio, Antonio Guzmán, Jaime García, Humberto Campos, responden más allá de los testimonios, y explican que es ser joven, que es ser activista; la organización clandestina y desde la resistencia. Es decir, nos encontramos con la experiencia y memoria en un proceso de 50 años de coherencia y congruencia en una postura de resistencia a las estructuras de poder.

Palabras clave

Juventud; Lucha social; Movilización; Política; Estudiantes.

A modo de introducción

A lo largo de la historia, México ha sido un país de particular matiz en cuanto a movimientos sociales y estudiantiles se refiere, sus cambios, costumbres, enfrentamientos y política en general es foco de sumo interés a la vista de sus demás países hermanos pertenecientes a América Latina, claro está naciones como Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Perú entre otros; Han vivido y continúan viviendo una



revolución sorprendente, ya sea para exigir, denunciar, o mejorar las condiciones educativas, sociales, económicas y de corte político. Respecto a la lucha estudiantil, México vivió uno de los movimientos más conocidos a nivel mundial, el cual tuvo lugar entre los años de 1968 a 1971 (aproximadamente)

Este movimiento pertenece también y se engloba en todas las movilizaciones ocurridas tanto en territorio latino como en el europeo y asiático, tuvo influencias claro, de personajes como el Che Guevara; El contexto global se enfocaba en lo que ocurría en territorios como Francia (mayo francés), la primavera de Praga, movimiento el cual sacudió la estructura del socialismo soviético, la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, por mencionar algunos. Ya que incluso en Japón existió la movilización por parte de estudiantes en 1968.

En algunos espacios se ha percibido el movimiento estudiantil mexicano como una matanza en el sentido reduccionista y simplista de lo que en realidad significó y ocurrió antes y después de aquel 2 de Octubre, en donde cientos de estudiantes pertenecientes a diversas instituciones del país, tales como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, se enfrentaron a un sistema gubernamental que ya no daba para más, la represión, los presos políticos y las condiciones económicas del país fueron las gotas que permitieron que el vaso derramase aquella valentía la cual se desconocía que tenía la juventud.

Ahora bien nuestro interés ahora a 51 años del movimiento es poder exponer como aquellos sobrevivientes de aquel fatídico capítulo para la historia mexicana, permanecieron en lucha y resistencia frente a las ideologías y paradigmas ya establecidos, de qué forma ellos han modificado sus técnicas, organización y pensamientos aún al pasar de los años; Como investigadoras pertenecientes a la rama de las ciencias sociales y humanísticas, presentamos los resultados de un arduo trabajo de investigación el cual se ha gestado desde hace 3 años atrás.

Palabras clave

Juventud, lucha social, movilización, política, estudiantes

¿Por qué esta historia?

La historia del presente en nuestro país, comienza a reconocer a aquellos actores que, asumiendo una actitud de resistencia al sistema, se hicieron presentes en el movimiento social de 1968, fundamentado un parteaguas en la organización de movimientos colectivos en el siglo XXI. En la conmemoración de 50 años de 1968, nos encontramos



con aquellos jóvenes, hoy viejos, que permanecieron en “lucha y resistencia” por un cambio social.

A pesar de que estos fueron perseguidos, encarcelados e incluso abatidos por el mismo Estado, tras 50 años las voces silenciadas por décadas hoy hacen hablar y hacen eco a las historias divergentes de la izquierda mexicana, de tal forma que en sus testimonios encontramos miradas y memorias distintas a una historia oficial.

La riqueza de estos testimonios nos conduce a presentarlos desde la mirada longitudinal del presente hacia el pasado, aportando a las fuentes de información, a la historiografía temática y a la ruptura de silencios. Así mismo, el afortunado acercamiento que como investigadoras tuvimos al Colectivo Memoria en Movimiento nos llevó a reconocer la multitud de posibilidades en la investigación desde las ciencias sociales, sin embargo, momentáneamente nos centramos en la comprensión de una historia que señala un proceso desde la experiencia de cincuenta años, donde los múltiples caminos de vidas diferentes convergen en la identidad de resistencia y pervivencia dentro del sistema social injusto. Vale la pena mirar estas historias.

Metodología

Para este trabajo se ocuparon las técnicas de dos disciplinas sociales, historia y sociología, que, si bien pertenecen a una misma rama, comparten técnicas y validan información como historia del presente, cada una tiene un análisis particular, donde las autoras encontraron, más allá de las diferencias de técnicas como “grupo focal”, o “etnografía”, entrevistas “dirigidas” o “testimonios”, puntos de encuentro respecto procesos de resistencia.

Así, nos sumamos a la propuesta de Wallerstein en su obra “Abrir las ciencias sociales” lo que nos llevó a discusiones y análisis fructíferos y que aquí presentamos.

En este sentido, la pregunta eje de esta ponencia es: ¿Cómo se platica el proceso de 50 años desde una postura de resistencia y lucha por los miembros del Colectivo en Movimiento?

Los integrantes del Colectivo Memoria en Movimiento.

En México, el 2 de octubre es un referente de explicación histórica sobre un movimiento popular encabezado por jóvenes estudiantes, durante al menos tres décadas los archivos oficiales estuvieron cerrados para trabajar este tema desde una historia de archivo; por fortuna ante la memoria el sistema no pudo vencer y mientras las décadas transcurrían, en el imaginario la fecha 2 de octubre comenzaba a convertirse en el



referente de organización social para señalar demandas específicas a la autoridad, así como también en el referente de organización de jóvenes que buscan cambios de mejora y justicia para ellos y la sociedad en general.

Debemos decir que el 2 de octubre de 1968 se realizó una matanza de jóvenes estudiantes en la Ciudad de México, donde los sobrevivientes fueron encarcelados, perseguidos, escondidos en los siguientes meses; así como una buena parte de los sobrevivientes decidió continuar con las convicciones arraigadas desde su participación en el movimiento del 68, y otros movimientos sociales antes y después del 68, para pervivir dentro de una actitud de resistencia y denuncia del sistema capitalista del país y del mundo.

En este proceso se reencontraron compañeros que fueron jóvenes brigadistas en 1968, para organizarse nuevamente en un Colectivo llamado “Memoria en Movimiento”, con la intención de sumarse a las actividades de conmemoración, rememoración, festejo y denuncia en el aniversario 50 de 2 de octubre del 68.

Debemos puntualizar que en los testimonios recogidos para este trabajo específicamente, fueron de cinco personajes, miembros del Colectivo MM, a ellos aprovechamos el espacio para agradecerles: Myrthokleia González, Sergio del Rio, Antonio Guzmán, Humberto Campos y Jaime García.

Ellos tienen en común haber sido estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y tener diversos papeles en el movimiento de 1968, excepto Antonio Guzmán, quién se sumó años más tarde a la lucha social desde la izquierda mexicana, pero que también, como dice él mismo, se considera hijo del 68.

En ese tiempo todos formaban parte de una estructura familiar sólida, ninguno era padre o madre, todos eran estudiantes y en esa época ser estudiante era un privilegio; ninguno tenía asegurado el futuro económico, al contrario, su objetivo inmediato era concluir sus estudios y obtener un empleo remunerado.

Después de la tragedia del 2 de octubre, el gobierno decidió encarcelar todos los estudiantes que pudiera, pero la rebeldía y tenacidad de la juventud volvió a desafiar al estado, teniendo como consecuencia una nueva matanza el 1 de julio de 1971 de jóvenes que realizaban una manifestación en el centro de la Ciudad de México.



Ante un sistema que mata a jóvenes estudiantes no hay muchas alternativas, una de ellas era alienarse y otra era continuar con la lucha desde otras trincheras. Esta segunda opción fue la de los compañeros.

Myrthokleia terminó su carrera como la primera mujer de generación en la Escuela Técnico Industrial Wilfrido Massieu del Instituto Politécnico Nacional y así mismo se convirtió en maestra de esa institución, su presencia ahí ya era una rebeldía, su permanencia lo fue más, y para su momento divorciarse y criar a un hijo representaba otro desafío social que no evitó su participación en la organización de la comunidad donde ella vivía. Uno de sus compañeros fue Humberto García quien tuvo que salir del país para que no lo asesinaran, y cuando regresó no tardó en sumarse a las propuestas de organización universitaria (ahora como maestros) y política contra las autoridades déspotas, injustas y corruptas.

Sergio del Rio era un adolescente que regresó a estudiar después de las matanzas, pero estaba marcado para desarrollar una conciencia social que compartía con sus compañeros de clase y después con sus alumnos; Jaime García también era adolescente de 15 o 16 años en 1968, y formaba parte de una familia cuyos hijos fueron participantes activos desde 1967, Jaime fue fichado al igual que Myrtho y Humberto, y continuó como activista en diversos movimientos sociales.

Antonio Guzmán si bien fue estudiante también de bachillerato, (llamado Vocacional), él se enroló a la guerrilla tras la matanza de 1971. Ahí continuó con la certeza que la movilización social era el camino para modificar el sistema económico del país.

Hasta después de una década, estos jóvenes comenzaron a modificar las estrategias de resistir y luchar, ya con familia dependiente de ellos se sumaron a la economía para cobrar por su trabajo, que hasta antes era muchas veces solidario en función de la organización en la que participaban. Así, la década de los 80 y 90 llegó con el desarrollo del sistema neoliberal, una enorme frustración a nivel social y una continua posición de resistencia contra las evidentes áreas oscuras y corruptas del estado.

Esta resistencia se tradujo en posiciones políticas no siempre favorecidas, en jornadas extraordinarias de trabajo, en organización local, comunitaria, delegacional para establecer formas democráticas y transparentes de representación; pero especialmente, en ser coherente y congruente entre el discurso y las decisiones de la vida cotidiana.



Mi. Lucha y resistencia

Lucha es la acción del verbo luchar, el cual en México es utilizado para describir la actitud de una persona que, ante diferentes acontecimientos, permanece atendiendo, y defendiendo alguna causa.

Resistencia es la acción de resistir, por lo cual lo consideramos una característica de permanecía a pesar de, una convicción axial, que no necesita reconocimiento porque es individual, se hace presente en las pequeñas y grandes decisiones de la vida, es la congruencia del discurso frente a las acciones

Las resistencias también son aquellas conductas de oposición frente a las estrategias externas u obligaciones cotidianas, conductas que contienen intencionalidad y conciencia. Esta última englobada dentro de las relaciones sociales la cual canaliza a los estudiantes a rechazar el *ethos* (costumbre) y la jerarquía de las funciones de trabajo existentes.

Por otra parte, encontramos en la Teoría de la Resistencia (Giroux, Henry 1992) el significado del sentido común que conlleva a pensar en el contexto neoliberal, en las políticas culturales para el siglo XXI, la significación del neoliberalismo, el cual empezaba a ganar fuerza mediante su confianza en la educación de la cultura, la cual se pensaba, aseguraba un consentimiento generalizado.

Por ello los estudiantes provenientes de la clase proletaria no eran únicamente producto del capital económico, sino que dentro de la escuela se planteaban críticas al orden establecido, lo cual es marcado por la resistencia estudiantil colectiva, estas instituciones representan la pluralidad de situaciones y posiciones presentes; lo cual no excluyó la idea de conflicto ni quitó peso a los campos o posibilidades de resistencia.

En resumen, y conjuntando ambos conceptos, se entiende por lucha y resistencia las características en común de estos personajes en un proceso permanente, es decir, en su historia de vida ellos continuaron luchando, alentando a los jóvenes actuales, permanecen aún comprometidos y han actuado con conciencia social

Resultados y discusión

La presentación a la investigación del colectivo “Memoria en Movimiento” nos permite ver lo siguiente: *La esperanza de generar un cambio social*, es un denominador común ya que, a pesar de la falta de fuerza física, o habilidades de otro tipo, la alegría y el desmadre de los movimientos sociales genera un sentido libertario, incluso bajo los



diversos sometimientos familiares o del estado, la esperanza continua y sigue anclada en los jóvenes.

Se ven a sí mismos desde el presente con tintes de crecimiento y maduración en el proceso que estaban inmersos, así como el inicio de un proceso de integración social, rebasando los límites de diferentes escuelas. Se integran en un común nacional desde diversos espacios de lucha.

Hoy miran a los jóvenes como un sujeto que ha sido criminalizado, con pocas posibilidades de empleo, además teniendo en su contexto un grave problema social (narcotráfico), ya que el crecimiento de comercio ilegal de droga es una consecuencia de las pocas posibilidades de empleo. También, perciben respecto a lo que vivieron y les preocupa, una polarización de la propia juventud, ya que se ven establecidas relaciones efímeras, y la existencia de una desconfianza hacia el otro es generalizada.

Ante los calificativos de desprecio o de descalificación, estos personajes equilibran la actitud de los jóvenes en México como una consecuencia, reconocen –y es muy interesante- las limitadas oportunidades que hoy tienen y se comparan con ellos, pues a diferencia de quien tenía claro estudiar y luego trabajar, para cambiar su entorno, a los jóvenes actuales esta oportunidad se les ve rebatada, estudiar no es garantía de integración laboral remunerada, ni siquiera de integración laboral; el estado de confort que lograron sus padres no los ha motivado. Ahora la carencia se sobrepone la comodidad. De ahí que estos personajes en su preocupación y ocupación permanente por la mejora social, sientan como un deber dejar una última lección de resistencia, conversar tiene un propósito para quien quiera escucharlos. Se saben solidarios nuevamente con los jóvenes de hoy.

Se observa con desconfianza a los medios de comunicación, porque ante tanta información no hay una dirección determinada para cambiar el sistema, es muy fácil alinearse. De ahí ciertas resistencias con las tecnologías, no por falta de habilidad, sino por desconfianza a las mismas estructuras de poder que las sostienen.

Conclusiones

El estudio de los movimientos sociales, se encuentra vigente en toda América Latina, el proceso para entenderlos ha sido motivo de gran estudio para diversos investigadores, lo cual nos lleva a repensar en la importancia de los mismos, ya que como latinos podemos percibir un mosaico cultural y diverso, todo ello permite la deconstrucción en el entendimiento de los fenómenos contemporáneos, dejando así un amplio marco para



la resolución y proposición de formas de hacer investigación. Este análisis presentado pues, nos lleva a una reflexión de como los sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968 permanecieron en pie después de lo ocurrido, dedicándose ya sea a la docencia, al trabajo en programas sociales, o bien, orientando a los jóvenes actuales en diversas áreas.

Sus voces han vuelto a ser escuchadas, ya que la historia no ha dado cuenta de cada testimonio existente, permanece el miedo en algunos de ellos por hablar y expresar situaciones y vivencias de las cuales no se tenía conocimiento, por ello resulta indispensable continuar con el labor del sociólogo y del historiador para dar cuenta de ello, Latinoamérica continua teniendo las venas muy abiertas, persigue una utopía en donde las naciones puedan mantener un equilibrio, un desarrollo en materia de seguridad, igualdad, equidad, educación, salud, etc. Recordando al magnifico escritor Eduardo Galeano, entonces para que nos sirve la utopía si cada que nos movemos la vemos más lejana, pues bien, nos sirve para caminar.

Notas

¹ Maria Guadalupe Membrillo Carrera es licenciada en Sociología por la UNAM, realiza su investigación de titulación respecto a las relaciones parentales y el uso de la tecnología en familias mexicanas, y es asistente de investigación en el Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles. Susana Torres Ortiz tiene estudios de posgrado en Historia y Etnohistoria por parte de la UNAM y la ENHA, miembro del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles y coordinadora académica de un Centro de Maestros de la Secretaria de Educación Pública.

² Algunas palabras utilizadas dentro del texto son fieles a las entrevistas realizadas a los miembros del colectivo Memoria en Movimiento

Bibliografía

Giroux, H. (1992). *Teoría y Resistencia en Educación*. Argentina: Siglo XXI Editores.
Ricoeur, P. (2000). *Historia Memoria y Olvido*. México: Fondo de Cultura Económica.
Wallerstein, I. (2004). *Abrir las ciencias sociales*. México: Siglo XXI.



Legitimidad y acción colectiva: El caso del movimiento estudiantil chileno

Juan Sandoval Moya
Fuad Hatibovic Díaz

Resumen

A pesar de la desafección que han mostrado los jóvenes chilenos con respecto a las formas tradicionales de la política, en la última década hemos sido testigos de la irrupción de múltiples manifestaciones juveniles. En este proceso, los jóvenes han diversificado sus formas de organización más allá de los partidos políticos y los sindicatos, desplegando un nuevo repertorio de acción colectiva. Este ciclo de movilizaciones estudiantiles se inscribe históricamente en un contexto de cuestionamiento del sistema económico neoliberal y en el marco de las limitaciones políticas que tuvo el desarrollo postdictatorial de la democracia. Sin embargo, sabemos que la presencia de desigualdades o la crisis de las instituciones no se traduce linealmente en acciones de protesta, para ello debe existir un marco de sentido a partir del cual estas condiciones sean percibidas como ilegítimas por parte de los sujetos y que las acciones de protesta sean percibidas con la capacidad de modificar dichas condiciones ilegítimas. En este contexto, la presente comunicación presenta los resultados preliminares de un proyecto de investigación (FONDECYT 1180847) que analiza los discursos sobre la legitimidad de las diferentes formas de acción colectiva de jóvenes universitarios chilenos.

Palabras clave

Protestas; Jóvenes; Legitimidad; Discurso.

Introducción

En la última década hemos sido testigos en Chile de la irrupción de múltiples manifestaciones juveniles, siendo los ejemplos más significativos las protestas de los estudiantes secundarios del año 2006 y las movilizaciones universitarias que se vienen produciendo a partir del año 2011 y que tienen su más reciente expresión en las manifestaciones feministas del año 2018 y en las protestas sociales que actualmente ocurren en Chile. Este ciclo de protestas, sin embargo, no constituye un hecho aislado, más bien guarda relación con otros movimientos que se han producido en nuestro país en la última década, como es el caso de los movimientos medioambientales y territoriales, el movimiento por las pensiones “NO+AFP” y el movimiento contra la



violencia de género o por los derechos reproductivos. Del mismo modo, es un ciclo de manifestaciones que se relaciona con procesos ocurridos en otros países, como el 15M español, la primavera árabe, las protestas de Wall Street, los ciclos de movilizaciones de los estudiantes en Colombia o las manifestaciones por la legalización del aborto en argentina.

Los protagonistas de este ciclo de movilizaciones, son jóvenes que se distancian cada vez más de los mecanismos de participación electoral (Arias-Cardona y Alvarado, 2015), que cada día tienen menos confianza en las instituciones de la democracia y se alejan de las formas clásicas de organización, especialmente de los partidos políticos. Pero también estos jóvenes son los protagonistas de un proceso de revitalización de múltiples organizaciones sociales, artístico-culturales y comunitarias, de carácter territorial o estudiantil (Sandoval y Carvallo, 2017; Zarzuri, 2016), en las cuales ponen en juego formas de acción y participación política, constituyéndose en actores claves de movilizaciones sociales que trascienden las temáticas puramente estudiantiles, como ha quedado de manifiesto en los últimos años en las protestas “Ni una menos” o “NO+AFP” y que se han vuelto protagonistas principales del llamado estadillo sociales que está viviendo Chile en este momento.

El ciclo de movilizaciones estudiantiles que comienza el año 2011 en Chile, se debe inscribir históricamente en un contexto de cuestionamiento del sistema político y económico consolidado en la postdictadura chilena (Pereda-Pérez & Howard, 2015). En este contexto, desde la década del 2000 se agudiza el alejamiento de los jóvenes de la política formal y sus instituciones, dando cuenta de una crisis de sentido y legitimidad política que ha sido ampliamente descrita por la literatura sociológica chilena (Baeza, 2013; Sandoval, 2012; Segovia & Gamboa, 2012). Sin embargo, también se generaron otros procesos que en principio resultaron invisibles para la política formal, por su carácter latente, como es el caso de la emergencia de nuevas formas de organización y acción colectiva por parte de los mismos jóvenes. Como describen varios autores, más allá de la política formal, durante estos años los jóvenes han construido nuevas y diversas formas de acción política a partir de sus experiencias de participación en grupos políticos, culturales, de voluntariado y en las llamadas “tribus urbanas” (Zarzuri, 2016; Sandoval & Carvallo, 2017).

Este ciclo de movilizaciones se inscribe históricamente en un contexto de cuestionamiento del sistema político y económico consolidado en la postdictadura. En efecto, después de más de dos décadas de neoliberalismo en democracia, Chile vive



los efectos de los altos niveles de desigualdad económica generados por la altísima concentración de los recursos en los más ricos del país, que en nuestro caso es de las más alta, desigualdad que se suma además a las inequidades territoriales, etarias y de género. Esta situación a juicio de algunos autores supuso la instauración en la población de una surte de “malestar difuso” con el sistema, en el cual la satisfacción con la vida personal se acompaña de una percepción negativa de la vida en sociedad. Una característica del movimiento estudiantil de la última década es trascender las demandas particulares de carácter sectorial, articulándose a partir de la confrontación con el discurso de la mercantilización de lo social que se había naturalizado en nuestro modelo de sociedad. El movimiento estudiantil chileno representó el resurgimiento de un marco de acción colectiva que parecía perdido por los efectos de la dictadura y una transición pactada, y que su puesta en escena a partir del año 2011 logró cuestionar el carácter social del Estado en su conjunto. Lo anterior se tradujo en que el movimiento estudiantil logró rebasar los clivajes tradicionales de la política nacional (la disyunción dictadura-democracia), ampliando su capacidad de representación a demandas cada vez más transversales al sistema mercantil, instaurando un nuevo “clivaje” en la distinción Estado-Mercado.

Pero este ciclo de protestas también se debe entender en el marco de las limitaciones políticas que ha tenido el desarrollo postdictatorial de la democracia en Chile. Nos referimos a que, desde la transición, el sistema institucional ha sido cada vez menos capaz de conectarse con la construcción de la realidad política de los ciudadanos. Incluso después de los intentos por superar los enclaves autoritarios de la constitución política, el sistema institucional no ha logrado procesar y resolver con éxito los conflictos ambientales, territoriales, étnicos y de género surgidos en los últimos años. La postransición se ha transformado, tal como se ha descrito para el caso español, en una democracia de “baja intensidad”, caracterizada por la crisis de credibilidad de las élites, la desconfianza en las instituciones políticas y la corrupción. Esta crisis de legitimidad se ha visto profundizada a partir de la publicidad de casos de corrupción en las FFAA y carabineros, casos de abuso sexual en la Iglesia y casos de financiamiento ilegal de la política.

Lo anterior, nos indica que, en este contexto de crisis de legitimidad del sistema económico y político, se fueron incubando nuevas formas de ejercicio de la política, las cuales lograron adquirir visibilidad pública a partir del ciclo de movilizaciones estudiantiles del año 2011, al configurarse –a partir de la crisis de legitimidad del



sistema- un escenario de oportunidad en el que los colectivos juveniles pusieron en escena sus formas de acción colectiva en el espacio público. Como propone Aguilera (2012), las movilizaciones estudiantiles del año 2011 pusieron fin a la dinámica nacional, modular y autónoma que había tenido el movimiento estudiantil chileno y dieron origen a un nuevo repertorio de acción colectiva. Del mismo modo que en el movimiento 15M (Sampedro & Lobera, 2014), la primavera árabe (Arditi, 2012), el #OccupyWallStreet (Reguillo, 2017), o los ciclos de movilizaciones de estudiantes en Colombia (Archila, 2012), las protestas estudiantiles en Chile estuvieron caracterizadas por la presencia de nuevas formas de acción política.

Por su capacidad de ir más allá de las lógicas tradicionales de la política, el movimiento estudiantil ha puesto en escena un repertorio diverso de prácticas políticas, muchas de las cuales provenían de sus formas de organización cotidiana en colectivos políticos, grupos de voluntariado o de acción artístico-cultural (Sandoval & Carvalho, 2017). Nos referimos a unos repertorios en los cuales se “diversifican los espacios sociales de conflicto, multiplican los conflictos que se construyen y [se] apunta a distintos destinatarios de la acción” (Aguilera, 2012: 105). En este nuevo repertorio se produce un uso intensivo de las nuevas tecnologías y una apropiación simbólico-material del espacio público a partir de manifestaciones estéticas, simbólicas y performáticas como los *flash-mobs* (Guzmán-Concha, 2012; García & Aguirre, 2014; Ponce, 2017). Si bien el movimiento estudiantil chileno no ha recurrido a las acampadas de plazas, descritas en los casos de Madrid o New York, si recurre a múltiples acciones de “ocupación” transitoria del espacio público, transformando también a la calle en un “espacio intermedio” (Reguillo, 2017), es decir, en un espacio en el cual el movimiento genera sus propias coordenadas espacio-temporales. De ahí que para Paredes (2018) las marchas estudiantiles hayan tenido la capacidad de hacer una operación de inscripción performativa del espacio público.

La presente comunicación se propone describir los elementos fundamentales a partir de los cuales los jóvenes protagonistas del movimiento estudiantil chileno desarrollan nuevas formas de legitimación de la acción política, a partir de la puesta en marcha de un nuevo repertorio de acción colectiva.

Metodología

Se realizó un estudio cualitativo con un diseño de tipo descriptivo y analítico. Descriptivo porque la investigación se pregunta por las formas de acción política de los jóvenes universitarios que participan en distintas organizaciones; y analítico, porque el estudio



se propone construir un modelo comprensivo del modo como se articulan estas prácticas políticas en un nuevo repertorio de acción.

Se trabajó con un muestreo no probabilístico, de tipo intencionado y orientado teóricamente. Los participantes fueron 16 jóvenes universitarios, 9 mujeres y 7 hombres, con un promedio de edad de 23,3 años. Ningún participante era militante de partidos políticos tradicionales y todos eran integrantes de algunas de las siguientes formas de organización: colectivos políticos locales (CPL); Colectivos políticos institucionalizados (CPI); Grupos voluntarios (GV); Grupos artístico-culturales (GAC). Estas cuatro posiciones se exploraron simétricamente en las tres ciudades donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes universitarios del país: Santiago, Valparaíso y Concepción.

Se utilizó como técnica de producción de información la entrevista abierta, técnica que permite explorar la experiencia subjetiva de una determinada posición social, posibilitando la reconstrucción idiosincrática de las prácticas y trayectorias de unos sujetos que comparten una experiencia común (Alonso, 2015). Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de una hora y fueron grabadas en audio, previa aprobación y firma por parte de los participantes de una carta de consentimiento informado.

Las entrevistas fueron sometidas a un plan de análisis, en base a un sistema de codificación de temas y subtemas específicos (Coffey & Atkinson, 2005). Las categorías identificadas se analizaron desde una perspectiva discursiva, con el propósito de “interpreta lo comprendido”, es decir, situando las categorías en el marco de sentido en el cual se producen y adquieren significado, a saber: las experiencias de participación y organización de los propios jóvenes. El producto de este ejercicio de interpretación corresponde a los ejes temáticos a partir de los cuales presentamos los resultados de esta investigación.

Resultados

Las acciones Expresivas

El primer eje que podemos identificar en el repertorio de acción de los jóvenes, es un conjunto de prácticas de ocupación del espacio público en las cuales predominan las dimensiones estéticas, expresivas y performáticas. Nos referimos a la presencia de formas de acción-performance como los flash-mobs, es decir, formas de acción en que un conglomerado espontáneo y anónimo de personas actúan conjuntamente en un lugar público para realizar algo inusual o notable, para posteriormente desarticularse. Es un tipo de acción que recurre al uso de disfraces, marcaras, marionetas gigantes y carteles



con ironías y dibujos ridiculizadores de las élites, en las cuales los jóvenes utilizan contenidos de la cultura musical y televisiva para construir la protesta como una escena.

Como se puede constatar, los jóvenes valoran el aporte diversificador que hacen estas actividades a las movilizaciones estudiantiles y las consideran acciones capaces de convocar a aquellos actores menos politizados. Pero también estas formas de acción se constituyen para los jóvenes en un puente que facilita el acercamiento entre sus demandas y el resto de la sociedad. Lo anterior, por dos razones fundamentales, primero porque las acciones lúdicas y expresivas logran simplificar el mensaje político del movimiento, permitiéndoles mejorar la comunicabilidad de sus demandas y la convocatoria de sus actividades. Y segundo, porque este tipo de acciones establecen una conexión emotiva y vivencial con los demás integrantes de la sociedad, lo que posibilita que la ciudadanía alcance altos niveles de empatía con el movimiento.

Acciones de confrontación

Un segundo eje que los jóvenes identifican como constitutivo de su repertorio de acción son los paros, marchas y las tomas de locales universitarios, las cuales se perciben como las formas más recurrentes de la acción colectiva del movimiento social y estudiantil. Para los jóvenes, la apropiación del espacio público a través de las acciones de protesta emerge como la estrategia definitoria de la acción colectiva del movimiento estudiantil, razón por la cual perciben como legítimas las acciones orientadas a “perturbar” el orden cotidiano a través de marchas y tomas. Estas formas de acción posibilitan que el movimiento establezca explícitamente un conflicto y una ruptura de la vida social.

Es decir, lo que define canónicamente a una protesta social sería precisamente la ocupación de las calles y la explicitación del conflicto. Y si bien los jóvenes están conscientes de los riesgos que ha supuesto cierto grado de rutinización de estas formas de acción en los últimos años, consideran que éstas siguen siendo las formas de acción más importantes del movimiento estudiantil. Para los jóvenes, las marchas y otras formas de acción (velatones, cacerolazos, etc.) actúan como una manifestación de la fuerza, masividad y vitalidad del movimiento.

Acciones Violentas

El tercer eje que podemos identificar son las acciones violentas, es decir, aquellas formas de acción que suponen daño a la propiedad pública o privada o un enfrentamiento directo con otros sujetos en el marco de manifestaciones públicas. La mayoría de los entrevistados no comparten la violencia en sí misma, y no le asignan un



lugar entre sus formas de acción, evaluándola como un tipo de práctica que genera efectos negativos en la sociedad y en las mismas organizaciones. Sin embargo, los jóvenes también comparten la idea de que existe cierta inevitabilidad de las manifestaciones violentas en las protestas sociales. Para la mayoría, estas formas de acción deben ser entendidas en el marco de un sistema de relaciones que no tiene ninguna legitimidad y que es percibido como violento

Los jóvenes asumen que la acumulación de los efectos de una estructura social injusta generaría las manifestaciones de violencia, desplegando con ello una operación retórica que suspende el juicio moral sobre estas acciones al definir las como efectos de una violencia estructural. Es decir, recurren a una hipótesis energética para explicarse la violencia, sosteniendo que la acumulación de rabia que genera la situación de injusticia debe ser liberada de alguna forma, emergiendo la violencia como la escenificación de la ruptura con el sistema.

De este modo, el lugar de la violencia en el repertorio de acción que describen los jóvenes es ambivalente, ya que, por un lado, se presenta como un tipo de acción que es principio rechazada, pero que al mismo tiempo se percibe como inevitable.

Los modos de organización legítimas

Un cuarto eje que aparece es el tema de las formas de organización legítimas. Para los jóvenes, la implementación de formas de organización en las cuales predomine la horizontalidad entre sus integrantes, actúa como una de las condiciones de posibilidad para sus prácticas políticas, entendiendo que en ellas se juega la materialización de sus visiones acerca de la democracia participativa. Estas prácticas de auto-organización se expresan de diferente manera según el nivel de formalización que tienen los colectivos. De este modo, por ejemplo, los colectivos que están en proceso de institucionalización, ponen en juego estos principios en diferentes espacios y niveles, a través de la coordinación de una red de mesas de trabajo a través de las nuevas tecnologías, destacando que ellas, a pesar de tener diferenciación de roles, se promueve la democracia como valor fundamental de la organización.

Por su parte, aquellos colectivos y organizaciones locales o temáticas mantienen estructuras orgánicas de menor complejidad. Son grupos que prácticamente no tienen diferenciación de roles y en los cuales se promueve las responsabilidades rotativas con el fin de potenciar a todos los integrantes del grupo. Sus reuniones son de tipo assembleísticas y predomina en su acción las dimensiones tácticas por sobre las estratégicas, volviéndolas organizaciones en constante deliberación.



Reflexiones finales

Para finalizar podemos concluir que las formas legítimas de acción política que se pone en juego en el ciclo de movilizaciones de los estudiantes chilenos, se constituyen a partir de la articulación de prácticas específicas que se despliegan en las manifestaciones, con estructuras organizativas y de comunicación que desarrollan los colectivos y grupos que participan en ellas. Hablamos de un repertorio en el que reconocemos tres formas de acción: expresivas, de confrontación y de violencia; las cuales a su vez se articulan en las posibilidades organizativas y comunicacionales que posibilitan las orgánicas horizontales y en red.

Desde una perspectiva más conceptual, lo nuevo de este repertorio de acción política es su “carácter de acontecimiento” (Lazzarato, 2006). Un acontecimiento como las manifestaciones estudiantiles chilenas, no puede predecirse desde la lógica de la política tradicional, ya que representa una ruptura, una discontinuidad con el orden social en el que emerge, y por ello, necesariamente se ubica fuera de dicho orden. Es decir, las formas de acción expresiva, las acciones de confrontación y la propia acción violenta que se despliegan en el movimiento estudiantil no son posibles de ser explicadas a partir de una pura relación causal, porque precisamente en tanto acontecimiento exceden las condiciones que las originan y se transforman en algo radicalmente nuevo.

Sin embargo, como categoría teórica “el acontecimiento”, además de ser externo a la situación en la cual emerge, debe tener un lugar en ella con el propósito de tener significado. Por ello es que el movimiento estudiantil chileno emerge en torno a demandas que hacen sentido en el contexto de un cuestionamiento a un sistema social y político percibido como ilegítimo. El movimiento estudiantil del año 2011 partió como una reacción sectorial ante las políticas que profundizaban la mercantilización de la educación superior durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero en la medida que avanzó, esas demandas particulares se articularon en una demanda política capaz de establecer un antagonismo explícito con el orden político y económico postdictatorial (Pereda-Pérez & Howard, 2015). Las sucesivas acciones de protestas de los jóvenes chilenos se volvieron cada vez más estructurales, cuestionando elementos básicos del modelo económico, político y cultural.

Este carácter de acontecimiento de la acción política, ha quedado en evidencia en el actual ciclo de protestas sociales que se está desarrollando en Chile. En efecto, lo verdaderamente nuevo del ciclo de protestas que estamos viviendo en Chile, es su



carácter de acontecimiento, es decir, constituir un hecho que a pesar de que el orden del cual forma parte lo definía como imposible, irrumpe como acto abismal. Las protestas de octubre emergieron en torno a unas demandas muy concretas que le hicieron sentido a la mayoría de la población y que pasaron a representar rápidamente una crítica a la falta de legitimidad de todo el sistema. Las movilizaciones fueron un acontecimiento con la capacidad de romper con el orden establecido a partir de demandas particulares que posibilitaron articular un nuevo sentido.

Es verdad que desde una perspectiva tradicional las expresiones de rebeldía o protesta que hemos vivido en Chile pueden ser cuestionadas, porque su carácter de acontecimiento las convertiría en acciones que renuncian a la construcción de un relato general en el cual se pueda inscribir estratégicamente un proyecto de cambio social. Según esas críticas, estas acciones serían sólo reventones que, al carecer de una estrategia de largo plazo, serían fácilmente asimilable por las características de la sociedad dominante que rápidamente transformaría la carga libertaria de estas acciones en una nueva mercancía o un nuevo espectáculo.

Por cierto, las protestas de octubre, al igual que las que surgieron entre los estudiantes chilenos años antes, no tenían un plan previamente diseñado, por el contrario, diríamos que son las tácticas que han sido puestas en juego en cada una de estas manifestaciones las que han definido retroactivamente el plan. Es decir, en las propias acciones que se proponen interrumpir lo establecido –marchas, asambleas, cabildos–, se ha empezado a redefinir lo que es posible hacer, proponer y esperar. A mi modo de ver, esta característica del ciclo de movilizaciones que estamos viviendo, de haber emergido como acontecimiento, contra todo pronóstico, sin partidos, sin dirigentes y sin un plan previamente definido, representa su mayor potencialidad, porque posibilita que las múltiples articulaciones y agenciamientos que se han estado produciendo autónomamente por años y por todos los ámbitos de lo social, construyan puentes entre el mundo actual y otro posible, constituyendo modos de poner en acción una promesa de que algo diferente puede venir.

Bibliografía

- Aguilera, O. (2012). "Repertorios y ciclos de movilización juvenil en Chile (2000-2012)". *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 17(57): 101-108.
- Alonso, L. E. (2015). "La entrevista abierta como práctica social". En: M. García; F. A; L.E. Alonso y M. Escobar (editores) *El Análisis de la realidad social* (390-417). Madrid: Alianza.



- Archila, M. (2012). "El movimiento estudiantil en Colombia. Una mirada histórica". *Revista Observatorio Social América Latina* XIII (31): 71-103.
- Arditi, B. (2012). "Las insurgencias no tienen un plan, ellas son el plan: performativos políticos y mediadores evanescentes en 2011". *Debate Feminista* 23(42): 146-169.
- Arias-Cardona, A. M. y Alvarado, S. (2015). Jóvenes y política: de la participación formal a la movilización informal. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 13(2): 581- 594.
- Baeza, J. (2013). "Ellos" y "Nosotros": La (des)confianza de los jóvenes en Chile. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 11(1): 273-286.
- Coffey, A. y Atkinson, P. (2005). *Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación*. Alicante: Universidad de Alicante.
- García, O. y Aguirre, F. (2014). "Spatial practices and narratives: The GenkiDama for Education by Chilean Students". *Journal of language and politics* 13 (4): 732-754. <https://doi.org/10.1075 / bct.83.07gar>
- Guzmán-Concha, C. (2012). "The Students' Rebellion in Chile: Occupy Protest or Classic Social Movement?". *Social Movement Studies* 11 (3-4): 408-415. <https://doi.org/10.1080/14742837.2012.710748>
- Lazzarato, M. (2006). *Políticas del acontecimiento*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Paredes, J. P. (2018). En la calle sin permiso, Yo me educo y organizo. La manifestación por la educación pública como politización de la juventud chilena. Torres, R. Urzúa, G. y Sánchez, J. C. (Edts), *Juventud y espacios de participación en Chile y América Latina* (pp. 33-55). Santiago, RIL.
- Pereda-Pérez, P. & Howard, C. (2015) Post-authoritarian and democratic neoliberalism: Chile and New Zealand in the Wake of Global Discontent. *SITIES: New Series*, 12(1), 30-61.
- Ponce, C. (2017) Internet, nuevas formas de acción colectiva y subjetividades políticas: movilizaciones estudiantiles chilenas del 2011. *Persona & Sociedad*, 31(2), 173-196.
- Reguillo, R. (2017) *Paisajes Insurrectos. Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio*. Barcelona: Nuevos Emprendimientos Editoriales.
- Sampedro, V. y Lobera, J. (2014). The Spanish 15-M movement: a consensual dissent? *Journal of Spanish Cultural Studies*, 15(1), 68-80. <https://doi.org/10.1080/14636204.2014.938466>
- Sandoval, J. y Carvallo, V. (2017). Discursos sobre política y democracia de estudiantes universitarios chilenos de distintas organizaciones juveniles. *Revista Española de Ciencias Políticas*, 43, 137-160. <https://doi.org/10.21308/recp.43.06>



Sandoval, M. (2012). La desconfianza de los jóvenes: sustrato del malestar social. *Última Década*, 20(36), 43-70.

Segovia, C. y Gamboa, R. (2012). Chile: El año en que salimos a la calle. *Revista de Ciencia Política*, 32(1), 65 – 85. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2012000100004>

Zarzuri, R. (2016). Las transformaciones en la participación política de los jóvenes en el Chile actual. En M. A. Garretón (Coord.), *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. (pp. 133-159). Ediciones LOM: Santiago.



Para além da escola: A educação produzida por jovens e adultos – Feirantes – em uma feira-livre de feira de Santana.

Sara Soares Costa Mamona
Francisca de Paula Santos da Silva
Mário Procopiuck

Resumo

Este artigo apresenta reflexões a respeito de um projeto de pesquisa de doutorado, aprovado na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), tendo como principal objetivo compreender a Educação produzida por jovens e adultos feirantes que lutam por permanência numa determinada feira-livre no centro da cidade de Feira de Santana, na Bahia. A tese defendida é que aqueles sujeitos produzem educação na resistência, para além da educação experimentada nas escolas, portanto a pergunta inicial é: “Qual Educação é produzida pelos jovens e adultos feirantes que, em suas lutas e resistências, mantém viva a feira-livre no centro de Feira de Santana?” As primeiras aproximações teóricas fixam o olhar no caráter educativo produzido por aquele coletivo. Assim, traz discussões vinculadas à Educação Popular, Cultura, Resistência e Educação Jovens e Adultos não-escolar, para marcar o lugar da produção de processos educativos fora do ambiente escolar e que, apesar disso, não se faz menor ou inferior àquele. Esse estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão de Literatura, porém o norte metodológico da pesquisa em si será a Pesquisa-Ação por entender o contexto de luta e opressão experimentado pelos feirantes e por vermos, nesta metodologia, a possibilidade de mobilizar um coletivo em prol de entender e intervir em realidades opressoras. Não há conclusões possíveis, neste momento, além da convicção do papel fulcral desempenhado pela Universidade Pública, na produção de pesquisas como estas, para pensar e, se possível, intervir para as transformações necessárias às sociedades contemporâneas.

Palavras chave

Cultura. Feira-livre; Educação de Sujeitos Jovens e Adultos; Educação Popular; Resistência.

Introdução

O objetivo deste artigo é apresentar algumas reflexões contidas em um projeto de doutorado em andamento que busca discutir a feira-livre, a educação produzida neste espaço educativo singular, as resistências empreendidas por um coletivo de pessoas



em luta por permanência e sobrevivência a despeito de todo o movimento sanitarista de retirada desta forma de trabalho do centro de uma cidade. A metodologia utilizada na produção deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, por não terem sido produzidos materiais advindos da pesquisa-ação, caminho metodológico para construção desta pesquisa.

O artigo está dividido em quatro seções. A seção, após a introdução, apresenta uma contextualização breve do município de Feira de Santana, na Bahia, e sua relação ancestral com a feira-livre, onde se dará a pesquisa. A seção traz também objeto, objetivo geral, perguntas da pesquisa e a história por detrás do encontro com o fenômeno a ser investigado. A seção subsequente traz uma aproximação teórica com algumas categorias emergentes e um esboço do caminho metodológico pretendido. A última seção, traz algumas considerações finais, sem um necessário desfecho, em função da pesquisa ainda não tem robustez para grandes análises além da potência trazida por estudos que decidem olhar os excluídos da sociedade, seus saberes e aquilo que, com eles, podemos aprender.

O contexto da pesquisa: Feira de santana e sua feira-livre ancestral

O município de Feira de Santana tem sua origem marcada pelo comércio pecuário e uma feira (livre e do gado) erigida em torno de um povoado privilegiado por excelentes pastagens; pela presença de dois importantes rios; por localizar-se no caminho direto entre o recôncavo e a capital baiana; e, por ser rota fácil para as pastagens de Jacobina, Mundo Novo e do Médio São Francisco (POPPINO, 1968; SILVA, 2006). Feira de Santana, com origem no século XVII, se estabelece no início do século XIX, atraindo tropeiros e comerciantes de várias partes do Brasil, chegou a representar em 1950 o maior centro comercial do Nordeste e teve uma das maiores feiras de gado do país, segundo Poppino (1968).

Na feira-livre achava-se de tudo, de produtos manufaturados às mercadorias do sertão. Corre-se até hoje um dito que “em Feira acha-se de tudo, até asa de avião”. Na feira-livre, ocorrida no centro do município até a década de 1970, reuniam-se cordelistas, contadores de “causos”, repentistas, quitandeiras, malabaristas e tantas outras figuras as quais faziam daquele lugar um encontro popular. Segundo Oliveira (2008, p. 41) a feira-livre era “[...] um ambiente de sobrevivência, de celebração, costumes, do estabelecimento de redes de solidariedade. Ela tornara-se um elemento de identidade da cidade” e era tão forte que acontecia mesmo em dias de feriado, sobrepondo-se, enquanto identidade popular a qualquer outra atividade.



Ao longo do tempo, porém, a feira-livre e, em especial, a do gado – acima de tudo ligada à cultura sertaneja –, ocupava grande parte do centro da cidade (até 1977), passou a ser vista como incoerente com a modernidade e o progresso desejados por algumas elites do município, passando a ser vinculada ao atraso. Em acordo com os estudos de Contreras (1999) podemos inferir que a ideia de modernidade vivida em Feira de Santana esteve imbricada no discurso político e social dominante de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Para o autor, esse discurso reforça a ideia de modernidade como forma de alcançar o desenvolvimento, conseguido através do urbanismo e industrialização – únicas formas concebidas para superação do subdesenvolvimento. Neste sentido, Feira de Santana buscou adaptar-se a esta nova realidade imposta pelo discurso dominante de desenvolvimento.

É justo após a segunda grande guerra (findada em 1945) que o projeto dos países centrais e de organismos internacionais se voltam para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos através do crescimento econômico. Santos e Rodriguez (2002) destacam que este projeto de desenvolvimento econômico, pensado sem as classes populares, está pautado na aceleração do crescimento econômico através da industrialização e da garantia de resultados macroeconômicos que desconsideram fatores importantes para o desenvolvimento equânime da vida em sociedade. Naquele projeto desenvolvimentista hegemônico, o crescimento econômico era algo deslocado da vida, não se colocando à serviço do bem comum e da melhoria da qualidade de vida das pessoas em geral. Desconsiderava outros aspectos da vida em sociedade, razão de existir das economias, e promoviam uma inversão de valores ao sujeitarem a vida e as necessidades humanas ao poder econômico.

Imbricado nessas discussões e acontecimentos, iniciou-se, em Feira de Santana (década de 1950) um movimento que resultaria na retirada da feira do gado (do vaqueiro e de tudo que ele simbolizava) do centro da cidade (Oliveira, 2008), e, posterior, levaria a extinção da feira-livre, em 1977, por meio de um decreto municipal. Associada à sujeira, ao feio, ao atraso e causadora de prejuízos ao comércio local, a feira não atendia, segundo a compreensão de algumas elites, ao modelo de urbe impulsionada pelo processo desenvolvimentista da época.

Após a violenta extinção da feira-livre – um dos símbolos da identidade feirense –, os jornais registravam os sentimentos, vividos naquele tempo, nos quais a fala de jornalistas, representantes comerciais e políticos (elites) era favorável à retirada da feira-livre do centro da cidade. Por outro lado, as vozes dos feirantes revelavam algo peculiar,



conforme alguns dos relatos encontrado em Moreira (1994, p. 195-198), com depoimentos recolhidos, em 1977, quando da retirada da feira-livre do centro da cidade: “Vou sentir muita falta deste pedacinho de terra onde armo minha barraca [...] mas Deus é quem vai tomar conta de tudo, e só ele é quem sabe do destino da gente” (Dona Lourdinha, barraqueira); “[...] se eu tivesse preferência ficaria aqui no mercado, mas lei é lei então a gente tem que cumprir” (Raimundo Santana, vendedor de requeijão) – Essa visão fatalista, como diria Freire (1987), acontece quando, numa dada situação opressora, não se localiza, efetivamente, o opressor e quando ainda não se possui uma “consciência para si” (Freire, 1987, p. 27).

Nos dias atuais, o discurso das elites continua vinculando a feira-livre ao inconveniente, porém, os feirantes já não calam:

A feirante Livia Maria Cerqueira Azevedo, 38 anos, que comercializa há mais de 25 anos na Senhor dos Passos, [desde os 13 anos de idade] discorda da ação [de retirada ocorrida no dia 28.08.2017]. ‘Eu tenho dois filhos pra sustentar e a gente quer que eles arrumem a gente aqui ou abra a praça, que não está servindo pra nada’ afirmou (Trindade, 2017).

A entrevista com a feirante Livia Azevedo, ocorreu no mesmo dia em que os feirantes organizaram uma manifestação, parando uma das principais avenidas da cidade em oposição a mais uma ação empreendida pela Prefeitura visando a retirada dos feirantes do centro de Feira de Santana. Deliberadamente parecem ignoram os ditames das leis e, seguem resistindo e permanecendo em seus locais de trabalho; apresentam seus argumentos e propõem soluções para o impasse. Não é difícil perceber a permanência da feira-livre num espaço educativo atípico, vivo, informal e distante dos espaços escolares.

Investigar a educação naquele lugar, permeado de histórias, identidades e cultura (s), justifica-se pela necessidade de compreender não o lugar da falta, mas a força daqueles sujeitos-feirantes; dada a necessidade de compreendermos melhor um coletivo possuidor de um firme propósito de ficar num determinado lugar, a despeito de todas as mobilizações de retiradas empreendidas pelo poder público municipal. Justificar-se também, pela necessidade de compreender mais a respeito da feira-livre e seu lugar na cultura de Feira de Santana, nos dias atuais. Quer por questões sociais, culturais, políticas ou teóricas, é possível identificar nestes componentes um fio de força para as lutas de classe e, quem sabe, o *élan* necessário para a tomada de uma consciência



coletiva; para a construção de conhecimentos e para a utópica transformação da realidade opressora como nos aponta a Educação Popular.

Esta educação alternativa e informal é construída por sujeitos em busca de ocupar espaços produtivos em oposição às pressões sociais; e, pode ser percebida nos enfrentamentos empreendidos pelos feirantes às autoridades locais de Feira de Santana – quando estas insistem em retirá-los do centro da cidade, em nome de um ideal desenvolvimentista hegemônico incapaz de admitir a convivência pacífica entre a tradição e o moderno. Essa educação passa, por vezes, invisível aos olhos, quando deveriam ser o cerne das reflexões da sociedade em sua busca por novas alternativas para se pensar a gestão, o desenvolvimento sustentável e a própria Educação.

Ao realizar, em 2016, uma atividade de campo, atendendo à solicitação da disciplina Currículo e Cultura, do Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), deparei-me com a cultura e a educação da feira-livre e seus feirantes. Olhar para Feira de Santana, com sua história tecida a partir de uma grande "feira" (livre e do gado) e como essa cidade tem tratado aquele espaço de trabalho (e vida) e seus feirantes foi ponto de reflexão naquela atividade acadêmica. Nas conversas com os feirantes, esclarecia sobre o propósito do estudo e eles participavam referendando, em suas falas, a imagem da Universidade como um centro de opinião/formação, como um lugar de fala eivado de autoridade e legitimidade, validado pela sociedade em geral e que por isso, poderia defender sua causa: - "*Fala bem da gente, porque querem nos tirar daqui*", solicitou um jovem, pouco menos de 30 anos, negro, feirante. Aquele pedido, guardava em si a situação de opressão vivida por alguém (ou um grupo de pessoas) que solicitava apoio para continuar dizendo, em favor da permanência, a sua palavra de ação, de reflexão e de *práxis*, num sentido freiriano.

As palavras daquele jovem jamais deixariam de ecoar em minha cabeça. Comecei a pensar que permanecer no centro de Feira de Santana e a própria luta daqueles sujeitos fazia da feira-livre um espaço educativo repleto de ensino e aprendizagens ocorridas nas trocas, tensões e enfrentamentos, para além da aparente desorganização, insubordinação e feiura que os olhos desatentos poderiam, superficialmente, enxergar. Comecei a pensar que, mesmo fora dos muros escolares, aquele lugar e aquelas pessoas, produziam um certo tipo de Educação que colabora, inclusive, para manter viva a identidade e a cultura na resistente feira-livre do centro de Feira de Santana. Estudar esta Educação, produzida por sujeitos-feirantes, poderia ser um caminho



possível para conhecer mais e melhor aquela realidade para quem sabe, poder ajudá-los, conforme solicitado outrora por um dele.

Pode parecer assustador ou pretensioso, para alguns estudiosos e pesquisadores, falar em uma Universidade ou uma pesquisa poder ajudar quem quer que seja, em função da neutralidade da Ciência. Parece que além de questionada, a "neutralidade" está cada vez mais desvendada como irreal. Neste sentido, Becker (1967, apud FLICK, 2009, p. 22) pergunta: "de que lado estamos?" e Flick (2009, p. 22), traz por sua vez, uma certa "[...] autorização moral para assumir o lado dos menos favorecidos, das minorias ou das vítimas [...]". Desta forma, o objetivo intrínseco desta pesquisa social é produzir conhecimento e entendimento sobre um dado fenômeno que, cumprindo uma função social, se traduz em conhecimento para a própria sociedade. E assim, vamos nos colocando mais distante de um ideário utilitarista de se fazer pesquisa e nos aproximando mais de uma compreensão fundada num novo paradigma da Ciência, no qual, segundo Santos (2002, p. 74) seria um "[...] paradigma de uma vida decente", um paradigma acima de tudo social. Constituindo-se, segundo Silva e Cavalcante (2013, p. 54), a partir de Santos (2002), uma nova forma de fazer ciência, voltada para os problemas reais da comunidade e fundada na solidariedade e fraternidade.

Partindo destas compreensões, algumas indagações povoariam meu pensamento: mas, afinal, qual Educação é produzida por aqueles sujeitos-feirantes nos movimentos para permanecer na feira-livre do centro de Feira de Santana? Diante desta questão o objeto deste estudo passou a ser "A Educação produzida pelos jovens e adultos feirantes que, em suas lutas, resistências e permanências, mantém viva a feira-livre no centro de Feira de Santana", sendo o principal objetivo do trabalho "Compreender a Educação produzida por jovens e adultos feirantes na feira-livre do centro de Feira de Santana, com vistas à permanência daqueles sujeitos em seu *lócus* de trabalho".

Aproximações teóricas e escolha metodológica: Educação Popular, cultura, resistência e educação jovens e adultos não-escolar

Buscando compreender a educação dos jovens e adultos feirantes na feira-livre do centro de Feira de Santana e fixando o olhar nos processos educativos contidos na prática social de um determinado grupo, alguns conceitos serão trazidos *a priori*, neste projeto. Para tanto, trabalharemos com o conceito de Educação Popular, Cultura, Resistência e Educação Jovens e Adultos não-escolar.

Para demarcar o entendimento sobre resistência tomamos alguns pressupostos nos trabalhos de Giroux (1986) que destaca, dentre outras questões: a noção de resistência



na qual os oprimidos não são sujeitos passivos frente a dominação; a necessidade de compreender como as pessoas resolvem a vida e respondem às estruturas de dominação vividas; os lampejos de liberdade contidos nos atos criativos de resistência; e o autor culmina com uma essencial esperança expressada. Giroux (1986) destaca que ao se investigar sobre qualquer ato de resistência será necessário perceber a sua vinculação com uma luta contra a dominação e submissão, bem como as possibilidades destes atos guardarem em si a oportunidade de superação do conformismo, servindo, ao mesmo tempo, para reanimar as lutas políticas coletivas.

Quanto aos estudos referentes à Educação de Jovens e Adultos não-escolar, uma pesquisa coordenada por Haddad (2016, p. 377-378), realizou um estado d'arte com teses e dissertações produzidas no Brasil, no período de 1998-2006, apontando esta área como “na metáfora do iceberg [...] à sua parte imersa e quase invisível na formação dos seres humanos”, onde a maior parte dos estudos e pesquisas estão concentradas na camada visível, justo a educação escolar ou formal. Para situar a escolha da Educação não-escolar, enquanto lócus da pesquisa, serão utilizados os trabalhos de Brobère; Bézille (2007); Gohn (2006) e Haddad (2016). Assim, uma das primeiras vinculações desta tese com a Educação está relacionada com a educação não-escolar, aquela ocorrida para além dos muros da escola.

No campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), segundo Brobère e Bézille (2007), foi com o advento do paradigma da Aprendizagem ao longo da Vida que se deu visibilidade à Educação existente fora dos muros da escola e àquela ocorrida ao longo e em todos os aspectos da vida humana. Assim, com aquele paradigma a educação informal (não-escolar) retornou ao cenário das pesquisas, segundo os autores. Este tipo de Educação é responsável por 80% das aprendizagens na vida dos adultos participantes da pesquisa de Tough (2002 apud Brobère; Bézille, 2007, p. 121), representando uma parte pouco explorada e diferente das demais formas de Educação, principalmente, pela falta de intencionalidade; não institucionalização; pelo lócus – podendo ocorrer na família, no trabalho, no clube, etc.–; e por seus agentes promotores, podem ser amigos, familiares, colegas, etc. (Gohn, 2006). Neste sentido, esta tese inscreve-se num modelo de educação situado para além dos muros escolares, com relativa singularidade, representando aquela parte submersa do iceberg nas pesquisas científicas.

Conforme é possível verificar nas Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEA), a Educação destinada às pessoas Jovens e Adultas, não se resume



apenas à elevação da escolaridade, certificação ou como modalidade, como se vê no Brasil hoje. Assim, corroborando com a síntese de Knoll (2012, p. 27), a EJA compreende não só a alfabetização universal, mas passa também pela: “[...] promoção da paz e cooperação internacional; aceitação dos valores democráticos fundamentais; expansão das oportunidades de aprendizagem para todos os grupos etários; igualdade de direitos entre os gêneros; demanda pelo desenvolvimento sustentável”.

Todos esses autores nos ajudam a pensar a Educação de Jovens e Adultos para além da escolarização (direito básico e fundamental) e propõem olhar a educação existente em todos os aspectos da vida, principalmente, aquela desenvolvida fora dos muros da escola, vinculada a Educação Popular e Cultura Popular, sendo esta Educação que pretendemos neste trabalho (Fávero; Freitas, 2011).

Neste contexto, a Educação Popular (EP) tem papel fulcral na compreensão daquela prática social enquanto modelo capaz de lançar luz para as situações excludentes e opressoras da vida social, nas quais estão inseridos aqueles jovens e adultos, sujeitos-feirantes, com vistas à transformação daquela realidade. Conforme destaca, Leis (2006, p. 73) está na essência da Educação Popular a prática social transformadora, um conjunto de ações com “finalidade de compreender coletivamente a vida para transformá-la”.

Ainda em relação à Educação Popular (EP), tomaremos os escritos de Arroyo (2009) para pontuar algumas questões relevantes para este estudo. Primeiro, no surgimento da Educação Popular, ela estava voltada para um povo despolitizado e, desta forma, moveu-se para “conscientização e politização”. Na atualidade, esta configuração mudou – o povo está mais consciente de seus direitos – e os horizontes da Educação Popular também avançam, agora para compreender esse novo momento e seus significados. Desta forma, os processos que alimentarão a EP deverão ser “[...] buscados nas vivências, tensões e confrontos colocados na sociedade em defesa de direitos” (Ibidem, p. 412). O autor, de forma radical, destaca o desafio da EP na atualidade: “encontrar o pedagógico nas resistências, inconformismos, rebeldias e até ‘violências’; nas lutas coletivas e nas frentes e campos dessas lutas por terra, teto, território, trabalho, vida, saúde, sobrevivência, memória e identidade, entre outras”, apontando para a necessária compreensão da “pedagogia dos movimentos, suas concepções pedagógicas, suas didáticas e seus processos de formação” (Arroyo, 2009, p. 408).

Nos termos destacados acima, inscrevemos este trabalho na perspectiva de identificar essas novas formas de educação experimentados pelo povo (feirantes) em sua luta



diuturna por sobrevivência; na direção das discussões referentes às estratégias de resistência e luta das classes populares; e, do próprio uso da EP, enquanto campo ideológico, prático e político, para a compreensão e transformação das realidades opressoras. Compreendendo, segundo a concepção gramsciana (Gramsci, 1978), que esta transformação acontece num diálogo entre o conhecimento produzido na prática daqueles sujeitos-feirantes (extraíndo o seu núcleo válido) e aquele produzido e acumulado ao longo da História (conhecimento acadêmico).

O conceito de cultura, adotado neste trabalho, é aquele trazido por Freire (1979, p. 21) como “[...] todo o resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, de seu trabalho por transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens”, sendo também “aquisição sistemática da experiência humana”. Nesta direção e ampliando, Hall (2009, p. 246) marcará o lugar da cultura popular como “[...] um dos locais onde a luta a favor ou contra a cultura dos poderosos é engajada; [...] É a arena do consentimento e da resistência”. Sendo, inclusive, “[...] um dos locais onde o socialismo pode ser constituído”. Assim, a cultura é criação de homens e mulheres, estabelecida em diálogo e com significados elaborados pelos próprios sujeitos em suas experiências diuturnas de luta, resistências, consentimentos, memórias, etc. Nesta perspectiva, a própria feira-livre, seus sujeitos-feirantes, jovens e adultos, passam a representar elementos culturais com um significado ainda mais importante para uma cidade como Feira de Santana constituída a partir de uma feira (livre e do gado) e que a carrega em seu próprio nome.

Para alcançar o objetivo principal desta investigação, instaurada num contexto de lutas e opressão, buscamos uma metodologia significativa e capaz de permitir a mobilização de um coletivo na resolução de seus próprios problemas; capaz de intervir e transformar a realidade, quando ela se faz opressora. Nesta perspectiva, a pesquisa-ação será tomada como método de pesquisa social “[...] concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual, os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (Thiollent, 2012, p. 20). Assim, a presente pesquisa busca ser um espaço na qual “[...] as pessoas implicadas tenham algo a ‘dizer’ e a ‘fazer’ [...]” e onde o pesquisador possa “[...] desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados” (Thiollent, 2012, p.22).

Uma vez definida a pesquisa-ação como método de investigação vinculada a Pesquisa Social, numa abordagem qualitativa, cumpre destacar alguns pontos norteadores: o



rigor e ética necessários a qualquer pesquisa científica, a possibilidade de construir uma ação para intervenção social, num problema real de interesse do coletivo pesquisado; as aprendizagens inerentes a este tipo de pesquisa para todos os sujeitos implicados (pesquisadores e demais envolvidos); a possibilidade dos sujeitos falarem a sua palavra, como diria Freire (1987), tendo os participantes da pesquisa “[...] voz e vez”, como destaca Thiollent (2012, p. 14).

A pesquisa terá nível microsocial. Portanto, não se pretende abarcar todos os feirantes ou todas as feiras-livre existentes no município, mas um recorte bem delimitado: Feirantes, jovens e adultos, trabalhadores da feira-livre remanescente daquela original, localizados no entorno da Praça Bernardino Bahia. Inscrita no campo da experimentação, esta pesquisa-ação reafirma a utilização do quadro teórico na busca por compreender/pensar o fenômeno estudado; o papel ativo do pesquisador, ligando-se ao acompanhamento e avaliação dos processos realizados para enfrentamento de uma situação-problema, além da produção de conhecimento com base nas análises desses processos; mesmo havendo uma interação entre pesquisador e as pessoas, a atitude daquele será sempre na perspectiva da escuta, sem imposição de concepções. (Thiollent, 2012).

As etapas desta pesquisa estarão em estreita relação com as observações trazidas por Thiollent (2012). Tais etapas constituem-se, neste momento, um roteiro a ser reorientado durante a pesquisa, constando de: I Discussão teórica dos principais conceitos emergentes da pesquisa. II Etapa de Diagnóstico – Aproximação com o campo mediante conversas informais, entrevistas para traçar o perfil dos feirantes, integrantes daquele coletivo a ser estudado. Nesta etapa, também serão identificados os possíveis colaboradores (feirantes), além dos critérios para inclusão destes na pesquisa. A etapa III (A) de Planejamento para construção dos Conhecimentos Científicos: A coleta de informações será realizada a partir de rodas de conversa, seminários, oficinas, sessões reflexivas, questionários e entrevistas, de antemão testados (Ludke e André, 1986). E a etapa III (B) de Planejamento para Ação: a) Busca consensual dos temas a serem trabalhados; b) Formulação dos objetivos práticos elaborados em acordo com o coletivo); c) Definição da problemática: momento onde será identificada a situação A (real) e a situação B a qual se pretende alcançar (ideal); d) Elaboração do Plano de Ação. Momento de planejamento das ações correspondentes em acordo com os interesses do coletivo e em estreita relação com a situação a ser transformada; e) Elaboração das hipóteses/diretrizes para a observação, a teoria e a



ação prática. Adiante, teremos a IV Etapa de Execução e acompanhamento com a realização de seminários, oficinas e rodas de conversa; execução das ações possíveis; acompanhamento das ações realizadas e atividades desenvolvidas no processo. Neste momento acontecerão as análises das informações e inferências a respeito dos dados coletados na etapa anterior, tendo como base os contributos de Bardin (2011) para Análise de Conteúdo. A V Etapa da Avaliação das ações executadas acontecerá em cada etapa da pesquisa. Por fim, teremos a VI etapa da Divulgação das informações e resultados – a ser definida coletivamente, sendo a Tese, parte desta etapa. Um determinado produto deve ser definido e elaborado, pelo coletivo, como resultado do esforço empreendido no processo de pesquisa ao qual estão vinculados.

Considerações provisórias

Este trabalho propôs-se a apresentar, em linhas gerais, um projeto de pesquisa em andamento, suas principais discussões, na busca por uma aproximação com os processos de resistência de um grupo de sujeitos-feirantes, jovens e adultos, não apenas para conhecer, mas também para intervir nesta realidade opressora, sobretudo, em função do movimento daqueles sujeitos para permanecer numa feira-livre no centro da maior cidade do interior da Bahia. Esta feira-livre, aqui considerada como uma escola sem muros – enquanto local de aprendizagens e ensino –, é palco da participação social de um coletivo que experimenta, todos os dias, as mais diversas problemáticas contemporâneas na busca pela gestão de sua sobrevivência e permanência num lugar determinado – local nobre e disputado tal qual o centro comercial de uma cidade –, desobedecendo a lógica desenvolvimentista das sociedades capitalistas que excluem, marginalizam e desconsideram as demandas sociais, econômicas e culturais de certos grupos.

Neste momento da investigação não falaremos em conclusões, porém destacamos a nossa convicção de que a Universidade Pública cumpre, através de pesquisas como estas, o seu papel fulcral de pensar e, se possível, intervir para as transformações necessárias às sociedades contemporâneas; ao mesmo tempo em que possibilita emergir, através do estudo de um determinado fenômeno, um universo diverso e cheio de possibilidades como aquele observado em uma feira-livre e em seus sujeitos outros.

Ao apresentar estes conceitos *a priori*, prezou-se por considerar a necessidade de comunicar ao leitor a visão adotada pela autora para condução deste trabalho. Nesta medida, falar em Educação de Jovens e Adultos, por exemplo, é marcar uma educação construída para além da modalidade de ensino como é comum no Brasil. Marcar a



Educação Popular é optar por um modelo de Educação inscrita num modo de operar que pressupõe conhecer a realidade para poder transformá-la. É também conceber um modelo de Educação e sociedade para homens emancipados, livres e críticos. De modo geral, é assumir que os sujeitos produzem Educação em vários espaços e não apenas naquele formal das escolas. Pensar a resistência nesta referência é ampliar a visão para não olhar os sujeitos como “aqueles que infringem as leis”, ao protestar ou desobedecer a uma ordem para não trabalhar neste ou naquele lugar, por exemplo, para ver além da aparente desobediência civil. Buscando perceber a possibilidade de contestar, questionam os poderes instituídos, as regras impostas e as opressões vividas na carne por alguns. Pensar tudo isso, não seria possível sem considerar a cultura (popular) lugar de luta e de consolidação de formas de conceber o mundo, assumindo que nada acontece na vida humana em sociedade fora da cultura.

Ao marcar essas concepções, reiteramos o nosso compromisso com uma pesquisa ética e socialmente implicada com os excluídos e com a perspectiva de produzir Ciência para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

Referência

Arroyo, Miguel. Educação Popular, Saúde, Equidade e Justiça Social. Cad. Cedes, Campinas, vol. 29, n. 79, p. 401-416, set./dez. 2009. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 23 jul. 2018.

Bardin, Laurence. Análise de Conteúdo. 70ª ed. Lisboa: LDA, 2011.

Brobère, Gilles. BÉZILLE, Hélène. De l'usage de la notion d'informel dans le champ del'éducation. Revue française de pédagogie, Paris, n. 158, p. 32-46, jan-mar 2007.

Contreras, Joan P. La construcción social del subdesarrollo y el discurso del desarrollo. In: Bretòn, Victor et al (ed.). Los límites del desarrollo: modelos “rotos” y modelos “por construir” en América a y África. Barcelona: Icaria, 1999.

Fávero, Osmar. Freitas, Marinaide. A educação de adultos e jovens e adultos: um olhar sobre o passado e o presente. Inter-Ação, Goiânia, v. 36, n. 2, p. 365-392, jul./dez. 2011.

Flick, Uwe. O que é pesquisa qualitativa? IN: Desenho da pesquisa qualitativa. Tradução Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Freire, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17º ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

Freire, Paulo. Conscientização – Teoria e Prática da Libertação: Uma Introdução ao Pensamento de Paulo Freire. [Tradução de Kátia de Mello e Silva; revisão técnica de Benedito Eliseu Leite Cintra]. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.



Gohn, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.14, n.50, p. 27-38, jan./mar. 2006. Disponível em: <<https://bit.ly/3hIZyDU>>. Acesso em: 04 jun. 2017.

Giroux, Henry. Resistência e Pedagogia crítica. *In*: Teoria crítica e resistência em Educação: para além das teorias de reprodução. Petrópolis: Vozes, 1986.

Gramsci, Antônio. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1978.

Haddad, Sérgio. Dossiê temático: Educação não escolar de adultos: estudos sobre educação popular e educação para os direitos humanos. Revista e-Curriculum, São Paulo, v.14, n.02, p. 377 – 392 abr./jun.2016. Disponível em: <<https://bit.ly/38iHsFD>>. Acesso em: 23 ago. 2017.

Hall, Stuart. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: Humanitas, 2009.

Knoll, Joachim H. A história das Conferências Internacionais da UNESCO sobre a Educação de Adultos – de Elsinore (1949) a Hamburgo (1997): a política internacional de educação de adultos através das pessoas e dos programas. *In*: IRELAND, Timothy Denis. Spezia, Carlos Humberto. Educação de adultos em retrospectiva: 60 anos de CONFINTEA / organizado por. – Brasília: UNESCO, MEC, 2012. 276 p.

Leis, Raúl. As Palavras São Noivas que Esperam: dez reflexões a compartilhar. *In*: Pontual, Pedro. Ireland, Timothy (Org.). Educação Popular na América Latina: diálogos e perspectivas. Brasília: Ministério da Educação: UNESCO, 2006.

Ludke, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

Moreira, Vicente D. Projeto memória da Feira Livre de Feira de Santana: Segunda fase, texto nº 01, algumas palavras. SITIENTIBUS, Feira de Santana, nº 12, p. 193-200, 1994.

Oliveira, Ana Maria C. Dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, imagens e práticas do cotidiano. (1950-1960). 220 f. Tese (Doutorado) - Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.

Poppino, Rollie E. Feira de Santana. Tradução: Arquimedes Pereira Guimarães. Bahia: Editora Itapuã, 1968.

Santos, Boaventura Sousa; Rodriguez, César. Introdução: para ampliar o cânone da produção. *In*: Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. Disponível em: <<https://bit.ly/3nfJj23>>. Acesso em: 05 maio 2018.



Santos, Boaventura de Sousa. Da ciência moderna ao novo senso comum. IN: A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 4. Ed. São Paulo: Cortez, 2002.

Silva, Aldo José Morais. Instituto geográfico e histórico da Bahia: origem e estratégias de consolidação Institucional. (1894-1930). 2006. 250 f. Tese. (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.

Silva, Maria Célia. Cavalcante, Elton Emanuel Brito. A crise da modernidade: ciência e sociedade. Revista Labirinto. Ano XIII, n. 19, 2013. Disponível em: <<http://www.periodicos.unir.br/index.php/LABIRINTO/article/view/997>>, Acesso em: 20 jan. 2017.

Thiollent, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez, 2012.

Trindade, Andrea. Para desobstruir calçadas, prefeitura ordena relocação de feirantes da Senhor dos Passos. Acorda Cidade. Feira de Santana, 28 ago. 2017. Polícia. Disponível em: <<https://bit.ly/3pPm8xm>>. Acesso em: 02 ago. 2018.



El voluntariado y su aporte al desarrollo local desde una mirada de Buen Vivir en Arequipa. El caso de la Red Arequipa Voluntaria.

Yosanira María Corzo Orihuela.
Luz Fiorella Salazar Berlanga.

Resumen

Las Naciones Unidas a través de sus Informes Mundiales del 2011 en adelante, reconoció la importancia de la política y las medidas legislativas para el crecimiento y el desarrollo del voluntariado. Donde señala que aproximadamente el 39% de jóvenes entre los 15 y 29 años participa en algún grupo o asociación de voluntariado, y el 34% de la población mayor de 18 años ha realizado algún tipo de trabajo voluntario. En Perú, el voluntariado contribuye con más del 1% al PIB del país. Además que ciudades como: Cusco, Trujillo, Piura, Arequipa y Pucallpa cuentan con altas tasas de participación voluntaria. Se cuenta con la Ley General del Voluntariado N° 28238.

En el caso de la Plataforma Red Arequipa Voluntaria (RAV), está suscrita a la iniciativa Soy Voluntario Perú, impulsada desde el Programa de Voluntarios para las Naciones Unidas, el MIMP y actores locales; estando presente en diez regiones del país. Siendo el modelo replicable, de la Dirección Nacional de Voluntariado en material del trabajo voluntario colectivo.

La Plataforma Red Arequipa Voluntaria (RAV) promueve, visibiliza y fortalece a las organizaciones de voluntariado miembros. Al 2019 cuenta con treinta y cuatro organizaciones que apuestan por la participación ciudadana activa, en sus diversas acciones impulsando proyectos y programas de desarrollo, en temáticas diversas; realizando un trabajo mancomunado entre el sector público, privado y la sociedad civil. Desde una intervención intergeneracional.

Por ello, es importante discernir si estos actores aportan al desarrollo local desde un enfoque de Buen Vivir en Arequipa. Siendo la motivación y objetivos para la investigación: ¿Cómo está organizada la RAV y cuáles son sus características?, ¿Cuál es su contribución al desarrollo local desde la mirada del Buen Vivir?, ¿Cuáles son sus experiencias exitosas, lecciones aprendidas y principales desafíos?

Tomando en cuenta, que el “Buen Vivir”, implica múltiples concepciones de los pueblos indígenas que son comprendidas como la aplicación de los “principios fundamentales de la madre tierra para la pervivencia de la humanidad, en armonía entre el ser humano y el medio ambiente, donde se incentiva la vida en plenitud, el saber vivir en armonía y equilibrio con los ciclos de la madre tierra, del cosmos, de la historia y en equilibrio con



toda forma de existencia, basados en el permanente respeto de su espiritualidad". Pinilla (2013).

Palabras clave

Voluntariado; Gobernanza; Participación ciudadana; Estado, Sociedad civil y Buen Vivir; ODS.

Introducción

El intelectual decolonial argentino Walter Mignolo (citado por Gudynas, 2010) menciona las posibilidades pluriversales de identidades locales y comunitarias de vivir en armonía en vez de un estado de competencia. Dice que a diferencia del desarrollismo que tiene como fin cambiar las realidades de los demás, se trata de la coexistencia de varios mundos.

Lo anteriormente expuesto, nos lleva a la necesidad de entender el concepto de voluntariado, que es parte esencial para justificar la motivación de la presente investigación.

El voluntariado, es toda labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual. Comprende actividades de interés general para la población (asistenciales, de servicios sociales, cívicas, de capacitación, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado y otras de naturaleza análoga, tendientes al bien común. Pinilla (2013).

En el país contamos con la Red Soy Voluntario, que tiene como misión lograr el fortalecimiento y reconocimiento del voluntariado, visualizando su contribución y carácter estratégico en el desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural del Perú, así como en el desarrollo individual y la realización de las personas. Presente en diez regiones del país y con las expectativas de llegar a las veintiséis regiones.

Y es tomando como referente a la Red Soy Voluntario, que nace la iniciativa de la creación de la Red Arequipa Voluntaria en el I Encuentro de organizaciones de voluntariado el 12 de Abril del 2014, bajo el grupo impulsor conformado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa, Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, Oficina Regional de MIDIS y Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas. Mediante acta de constitución cincuenta



organizaciones de voluntariado tanto de sociedad civil, estado y sector privado constituyeron la Red Arequipa Voluntaria, accionando a través de comisiones de trabajo:

Y teniendo como objetivos:

- Identificar y articular a las organizaciones de voluntariado en Arequipa.
- Sensibilizar, fortalecer e impulsar el voluntariado en Arequipa en espacios públicos y redes sociales.
- Promover la participación de nuevos actores en la promoción del trabajo voluntario.
- Fomentar la capacitación y el reconocimiento del voluntariado a nivel local.
- Empoderar a organizaciones de voluntariado miembros de RAV.
- Fomentar el diálogo, así como el intercambio de experiencias y el trabajo en red entre los diferentes miembros de las comisiones.
- Diseñar propuestas y políticas en materia de voluntariado.
- Generar alianzas estrategias con medios de comunicación para difusión de trabajo de *voluntariado en Arequipa*.

Y es reflexionando sobre esta mirada multidimensional y en permanente construcción en Latinoamérica, que urge, identificar a los actores que aportan a hacer posible esta aparente utopía, no solo en las comunidades indígenas, sino también en las urbes, como es el caso de Arequipa, que va evolucionando a Metrópoli y sufriendo transformaciones socio políticas significativas en el imaginario de sus habitantes y su memoria histórica colectiva.

Fundamentación del problema

Tonando en cuenta a Sousa Santos (2010) quien considera que El Buen Vivir se promueve haciendo uso de los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, ya que estos mecanismos revolucionarios facilitarían la convivencia y articulación entre diversas culturas, aceptación desde la igualdad en horizontalidad, cooperación y reciprocidad. De esta forma, se puede pensar construir una sociedad con una ecología de saberes.

Además a Gudynas (2009), quien indica que en cuanto al Buen vivir, sigue siendo necesario mejorar el conocimiento sobre el medio ambiente, profundizar el entendimiento de su riqueza ecológica, y generar nuevas opciones de gestión ambiental.



En ese camino es necesario abrirse a otras miradas éticas, en las cuales la naturaleza pasa a ser sujeto de derechos, reconociéndosele valores propios.

Lo que debe conducir a la reflexión sobre la necesidad de reconocer al voluntariado como un actor clave en los procesos de desarrollo, la necesidad de generar una política de voluntariado en el país. Y empoderarlos para permitir acercar esta utopía del Buen Vivir a todo el país con su contribución multidimensional, multisectorial e intergeneracional.

El voluntariado contribuye con el desarrollo mediante la acción voluntaria, que permite a las personas contribuir con la estabilidad y cohesión de sus comunidades y sociedades. Al involucrar a ciudadanas y ciudadanos en las decisiones que afectan sus vidas, el voluntariado se constituye tanto en una manifestación como en un motor de capital social y participación ciudadana, ayudando particularmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad a convertirse en agentes activos en su propio desarrollo. UNV (2011).

El voluntariado es una expresión básica de las relaciones humanas. Las personas necesitan participar en sus sociedades y sentir que otras personas se preocupan por ellas. Creemos firmemente que las relaciones sociales inherentes al trabajo voluntario son fundamentales para el bienestar de la persona y de la comunidad. El ethos del voluntariado se caracteriza por valores como la solidaridad, la reciprocidad, la confianza mutua, la pertenencia y el empoderamiento; todos ellos realizan una contribución significativa a la calidad de vida. UNV (2011).

Por ende, el voluntariado debe ocupar un lugar central en el discurso sobre el desarrollo a escala mundial, regional y nacional. El interés por muchos aspectos del voluntariado ha experimentado un auge notable en los últimos años. UNV (2011).

En el contexto peruano de los últimos años, el tema de la institucionalización del voluntariado y el desarrollo de plataformas y estructuras de coordinación para las organizaciones implicadas en el voluntariado, ha presentado, ciertos elementos esenciales que deben ser tenidos en cuenta. En el año 2004, al promulgarse la Ley General de Voluntariado (Ley 28238), se sientan las bases para la formación de la Comisión Nacional de Voluntariado (CONVOL). En el año 2007, la Ley Modificatoria 29094 designa los representantes que formarán parte de la CONVOL, además de ampliar las modalidades de voluntariado y reconocer el rol de promotor del Estado y sus responsabilidades directas en el fortalecimiento del Voluntariado. En el 2016 se hace



una segunda modificatoria y en la actualidad; se viene levantando información para un nuevo Proceso de Consulta de Modificatoria a la Ley, que debe presentarse en el Congreso de la Republica en marzo del 2020.

La metodología

Objetivos

El objeto de estudio de la investigación: Voluntariado

El objetivo general

Analizar el aporte del voluntariado al desarrollo local desde el enfoque del Buen Vivir en Arequipa. A través, del caso de la Red Arequipa Voluntaria.

Se tiene como objetivos específicos y por tanto resultados esperados:

1. Describir la experiencia de la Plataforma Red Arequipa Voluntaria como forma de participación ciudadana en Arequipa.
2. Describir las acciones de voluntariado de la Plataforma Red Arequipa Voluntaria y como aportan a al desarrollo local desde un enfoque de Buen Vivir.

Hipótesis

Las redes de voluntariado aportan al desarrollo local, como forma de participación ciudadana activa; y al trabajo intersectorial en Arequipa. Así mismo, aportan al Buen Vivir a través de sus acciones en favor de la economía, interculturalidad, el ambiente, ética y atención a los grupos vulnerables.

Preguntas de investigación

1. ¿Cómo está organizada la Red Arequipa Voluntaria (RAV) y cuáles son sus características?
2. ¿Cuáles son sus experiencias exitosas, lecciones aprendidas y principales desafíos de la Red Arequipa Voluntaria (RAV)?
3. ¿Cuál es su contribución al voluntariado al desarrollo local desde la mirada del Buen Vivir en Arequipa?

Según el carácter

La investigación uso la metodología Cualitativa.

Tipo de diseño



Transversal: Se acopio información, desde la generación de la Ley de Voluntariado del Perú Ley N° 28238 y el tiempo de existencia de la Red Arequipa Voluntaria. Y su rol en la actualidad en relación al desarrollo local.

Unidad de análisis primarias

Red Arequipa Voluntaria.

Según las fuentes

Primarias: Información de trabajo de campo.

Secundarias: Revisión documental.

Técnicas de investigación para obtención de datos

- Entrevista a profundidad o triangulares
- Focus group
- Observación Participante
- Participación acción: Talleres participativos con actores claves.
- Revisión documental

El plan de trabajo

ACTIVIDADES	NOVIEMBRE																														DICIEMBRE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6			
Proyecto de investigación					X	X																																	
Revisión bibliográfica y definición de la misma					X	X	X	X	X																														
Marco Teórico							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Marco Conceptual							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Diseño de herramientas de investigación										X	X	X	X	X	X																								
Aplicación de instrumentos													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Sistematización de información																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Análisis de resultados																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Redacción de informe final de investigación																										X	X	X	X	X									
Exposición de los resultados																																			X	X	X	X	X

Resultados

Experiencias exitosas de la plataforma red Arequipa voluntaria

1. Se ha posicionado la temática de voluntariado en la agenda pública de Arequipa.



2. Se han realizado actividades por el Día Internacional del Voluntariado en Arequipa por cinco años consecutivos en la ciudad.
3. Se ha identificado organizaciones de la Red Arequipa Voluntaria fortalecidas y con las que se puede trabajar de manera permanente.
4. Se ha fortalecido y visibilizado la labor que realizan de organizaciones activas de Red Arequipa Voluntaria.
5. Se ha contado con representatividad institucional de sectores público, privado y de sociedad civil diverso en actividades.
6. Se ha tenido una amplia cobertura en medios de comunicación que han permitido llegar a un amplio sector de la población de Arequipa
7. Capacidad de gestión demostrada de organizaciones de voluntariado a través de comisiones de trabajo que aportaron en las actividades programadas.

Lecciones aprendidas de la plataforma red Arequipa voluntaria

1. Se debe realizar planificación y programación con mayor tiempo de anticipación para garantizar éxito de eventos.
2. Se debe tener claridad de disponibilidad presupuestal con mayor anticipación para efectivizar gestiones y aportes.
3. Se debe medir capital humano y compromisos externos e internos para programación de actividades.
4. Se debe levantar información y construir base de datos de organizaciones de voluntariado existentes en Arequipa que puedan sumarse a la Red Arequipa Voluntaria.
5. Se debe promover la participación de todos los miembros de organizaciones de voluntariado, más que representatividad de personas.
6. Se debe generar mecanismos que garanticen cumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos en actividades programadas.
7. Se debe fortalecer el compromiso e involucramiento de equipo de la Dirección de Voluntariado del MIMP en Arequipa.
8. Se debe fortalecer el compromiso e involucramiento de equipo de las Plataformas Soy Voluntario en el Perú, articulando acciones y ejerciendo la incidencia política para objetivos comunes.
9. La existencia de este tipo de actores favorece la cooperación transectorial y consolida las Redes Soy Voluntario, como un espacio horizontal y mixto de



cooperación, ampliando además las posibilidades de interacción entre las entidades de distintos sectores que las integran o colaboran con ellas.

Retos y desafíos de la plataforma red Arequipa voluntaria

1. Se debe realizar un trabajo de identificación de organizaciones de voluntariado de los sectores público, privado y de sociedad civil para invitarlos a sumarse a la RAV.
2. Se debe generar la inscripción de las organizaciones de la RAV en el Registro Único de Organizaciones de voluntariado del MIMP.
3. Se debe generar una base de datos de la RAV con perfiles de las organizaciones a través de fichas para socializar el trabajo de cada organización interna y externamente.
4. Se debe fortalecer las capacidades de organizaciones de voluntariado en materia organizacional, comunicacional y de legislación de voluntariado.
5. Se debe ejecutar ferias de voluntariado en universidades y con jubilados para reclutar a más voluntarios.
6. Se debe generar alianzas estratégicas con empresas e instituciones que apuesten por el trabajo de voluntariado en Arequipa y puedan financiar iniciativas.
7. Se debe dar seguimiento a la nueva comisión de Comunicación e Imagen Institucional para que asuma el liderazgo en la difusión de cada una de las actividades de las otras comisiones, así como de las actividades propias de cada una de las Organizaciones de la RAV.

Conclusiones y reflexiones finales

La Plataforma Red Arequipa voluntaria, fomenta la visibilización del trabajo voluntario, la organización colectiva, el sentido ético y sobre todo la ciudadanía activa en Arequipa.

La Plataforma Red Arequipa voluntaria, posibilita el trabajo intergeneracional, multidimensional y multisectorial en Arequipa.

La diversidad de las organizaciones en la Plataforma Red Arequipa voluntaria permite la intervención y atención en temas diversos como cuidado del ambiente, objetivos de desarrollo sostenible, cultura viva comunitaria, inclusión social, familia y sociedad e incidencia política. A través de sus comisiones de trabajo. Logrando un impacto mayor, al intervenir de manera conjunta entre varias organizaciones.

Con el objetivo de motivar e incentivar a más voluntarios a ejercer su ciudadanía de manera activa, es imprescindible que el Estado propicie una Política de Voluntariado Nacional, que vaya más allá del mero reconocimiento y limitada promoción del



voluntariado y se extienda a construir gobernanza desde la reflexión que otorga el enfoque de Buen Vivir.

Replicar la experiencia de la Red Soy Voluntario y en específico esta triada posibilitada en Arequipa, que permite a la Sociedad Civil, Sector Público y Sector privado; contribuir al desarrollo local desde diversas acciones e iniciativas conjuntas.

Es importante generar las herramientas y liderazgos que permitan la sostenibilidad de la Plataforma Red Arequipa Voluntaria. Manteniendo sus principios y naturaleza primigenia. Además del espíritu voluntario contenido en la Ley de Voluntariado del país. Es necesario generar espacios de formación y sensibilización de voluntarios en instituciones educativas secundarias, técnicas y universitarias para contribuir al empoderamiento del actor voluntario y que asuma su rol como agente de cambio en la mirada tradicional de desarrollo y reconozca su aporte a la mirada de Buen Vivir con todos los retos y desafíos que demanda.

Es clave propiciar espacios informativos y de dialogo sobre el enfoque de Buen Vivir en Arequipa y la importancia de la labor voluntaria en sus diversas intervenciones. Ya que aunque claramente aportan a esta forma de ver el desarrollo, mayoritariamente desconocen teóricamente sus sustento e importancia.

Bibliografía

De Sousa Santos Boaventura (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo- Uruguay, Ed. Trilce.

Estatutos De La Red Perú Voluntario (2014). Lima- Perú.

Gudynas, E. (2010). La ecología política de la crisis global y los límites del capitalismo benévolo. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 53-67.

Gudynas, E. (2014). Ecologías Políticas. Ideas preliminares sobre concepciones, tendencias, renovaciones y opciones latinoamericanas. Documentos CLAES. Montevideo.

Gudynas, Eduardo. Enfoque en el Sur Global: Aprendiendo desde nuestras raíces, una Conversación sobre Vivir Bien.

Informe Ejecutivo - Balance De Red Arequipa Voluntaria 2018

Informe Ejecutivo - Reunión RAV- Plan De Trabajo (2015). Arequipa.

Ley General de Voluntariado N° 28238. MIMP - Perú

Pinilla, A. David Andrés. (2013). Concepciones sobre el Buen vivir de los pueblos indígenas en Colombia, frente al concepto de desarrollo de la sociedad mayoritaria: un estudio de casos, el pueblo Sikuani de la Orinoquia colombiana y el pueblo Arhuaco de



la Sierra Nevada. Maestría en estudios y gestión del Desarrollo. Universidad de la Salle, facultad de ciencias económicas y sociales, Bogotá D.C.

UNV (2011). V Informe sobre el estado del oluntariado en el mundo

UNV (2015). Redes De Entidades De Voluntariado En El Perú. Perú.



Línea Temática 6.

Género, configuraciones identitarias y nuevas agendas en las expresiones colectivas



**Etnicidad en debate:
El caso de las comunidades de Cantagallo y de Nueva Alianza en la
construcción de su etnicidad.**

Jesús Anzualdo Contreras

Resumen

La presente investigación pretende mostrar por un lado algunas particularidades de la etnicidad de las comunidades de Cantagallo y de Nueva Alianza. Y, por otro lado, es explorar las implicancias que acarea el denotar una etnicidad en un contexto de globalización. La comunidad de Cantagallo ha orientado sus estrategias a promover dos objetivos: la revaloración de su etnicidad y el desarrollo de ciertas habilidades. Mientras que la comunidad de Nueva Alianza se ha encaminado hacia la promoción de ciertas prácticas que permitan dos cosas: mostrar su etnicidad y adquirir ciertas competencias. Ambas comunidades ven con buenos ojos la modernidad y el desarrollo, pero su acercamiento o ingreso es distinto en ambos. La primera apunta hacia una gama más amplia para valorar su etnicidad frente a la otra que es mucho más restrictiva.

Asimismo, la pregunta que se quiere responder es cómo los grupos étnicos construyen su etnicidad y cuáles son los factores que toman en cuenta para su elección. Para ello se ha realizado un trabajo de campo en donde se ha realizado algunas entrevistas y observaciones participantes para el recojo de información.

Palabras clave

Etnicidad; Shipibo; Cocama; Comunidad; Identidad.

Introducción

La presente investigación tiene una clara intención en discutir sobre la etnicidad y todo lo relacionado a esa categoría. Por un lado, se trae a colación un caso que nos permita enriquecer nuestra discusión. Como ejemplos se tiene a las comunidades de Nueva Alianza y de Cantagallo. Ambas han venido construyendo su etnicidad tomando en cuenta sus limitaciones, así como sus aspiraciones. Las historias que proyectan son bastante particulares, pero al final nos dan detalles que contribuyan significativamente a nuestra discusión.

Y, por otro lado, se quiere hacer una discusión un poco más teórica y sobre la base del caso presentado. Cuestiones como su definición y su operabilidad son cuestiones claves a la otra de aterrizar en una política o un programa de desarrollo. Pero que



todavía es un tema abierto que conlleva muchos detalles a tomar en cuenta a la hora de implementar un proyecto.

Entonces, se va discutir la etnicidad presentando algunos hechos y eventos que denoten los modos y formas de cómo han venido construyéndola, pero también viendo los elementos diacríticos que se quieren realzar, así como lo que se quieren reprimir. Todo ello visto desde una óptima cotidiana y para ello se tuvo que hacer innumerables observaciones participantes.

La etnicidad

Quisiera comenzar imaginándonos cómo definiríamos la etnicidad de una persona. Parece ser una pregunta a la vista bastante simple, pero en el trayecto ha de ser respondida envuelve una serie de situaciones y hechos que nos hace complicado dar una respuesta suelta. El Banco Mundial bajo su Directriz Operacional OD 4.2 (1999) nos propone la siguiente definición:

«Debido a los variados y cambiantes contextos en los que los pueblos indígenas se encuentran, ninguna definición única podría recoger su diversidad. Comúnmente los pueblos indígenas se encuentran entre los segmentos más pobres de la población. Desempeñan actividades económicas que van desde la agricultura de subsistencia en o cerca de los bosques hasta trabajos asalariados y actividades en pequeña escala orientadas al mercado. Los pueblos indígenas pueden ser identificados en determinadas áreas geográficas por la presencia, en diferentes grados, de las siguientes características: (a) gran apego al territorio ancestral y los recursos naturales de esas áreas; (b) identificación propia e identificación por otros como miembros de un grupo cultural distinto; (c) una lengua indígena, comúnmente diferente a la lengua nacional; (d) presencia de instituciones sociales y políticas consuetudinarias; y (e) producción principalmente orientada hacia la subsistencia» (Banco Mundial, 1999).

Asimismo, en su reemplazo a dicha directriz, Política Operacional OP 4.10, nos indica que lo siguiente:

«“Pueblos Indígenas” [...] grupos vulnerables con una identidad social y cultural diferenciada [...] (a) su propia identificación como miembros de un grupo determinado de cultura indígena y el reconocimiento de su identidad por otros; (b) un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios ancestrales en la zona del proyecto y a los recursos naturales de esos hábitats o territorios; (c) instituciones consuetudinarias culturales, económicas, sociales o políticas distintas de las de la sociedad y cultura dominantes, y (d) una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del país o región» (Banco Mundial, 2005).



Otra institución representativa a nivel internacional es el Organismo Internacional del Trabajo (OIT) que propone lo siguiente:

«a los pueblos tribales [...] cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente o por una legislación especial; [...] por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas» (OIT, 2014, págs. 19-20).

Ya a nivel nacional el INEI nos propone una definición algo parecida a las anteriores:

«(a) Ocupación de territorios ancestrales, o al menos parte de ellos, y uso de sus recursos naturales. (b) Autodefinition o identidad étnica aunada a la identificación o reconocimiento por otros como miembros de un grupo cultural diferente. (c) Ancestro común. (d) Presencia de instituciones sociales y políticas consuetudinarias. (e) Cultura en general, o en manifestaciones específicas (como religión, sistema tribal, membresía en una comunidad indígena, vestido, medios de subsistencia, estilo de vida, etc.). (f) Idioma indígena (usado como único lenguaje, como lengua materna, como el medio habitual de comunicación con la familia, o como el idioma preferido, habitual, general o normal). (g) Producción de subsistencia. (h) No dominancia. (i) continuidad histórica» (INEI, 2010, pág. 16).

Como se puede ver hay varios elementos diacríticos que se quieren resaltar. Pero, también, salta a la vista la operacionalidad de dichos elementos. Cómo están relacionados, qué categoría al final es determinante, cómo se distribuyen los pesos, etc. Son varias las interrogantes y muy pocas las respuestas.

Asimismo, el problema de la asimilación o de la aculturación complejiza más los hechos. Premisas como la de Gugenberger (2005) que indican que las lenguas minoritarias, en este caso puede ser las indígenas o vernáculas, tienen a perderse en escenarios urbanos. También las instituciones pueden contribuir a generar esa asimilación. Trabajos como de James Daggett y Mary Ruth Wise (2008) nos describen como los egresado de la escuela terminan identificándose con la sociedad nacional y no con sus tradiciones locales; o el caso que nos plantea Luisa Elvira Belaunde et al (2005) que para las elecciones de autoridad tradicional se requiere cada vez más destrezas cultivadas por la escuela que habilidades tradicionales, ser un buen cazador. Es decir, el contexto urbano, así como las instituciones contribuyen a generar un cambio social.



Las comunidades de Nueva Alianza y de Cantagallo se insertan en una trama bastante particular. En donde cada una de ellas desde su contexto vienen construyendo su etnicidad tomando en cuenta sus limitaciones y sus aspiraciones. Tampoco, hay que ver que las categorías de lo urbano o lo rural deban ser asumidas como determinantes y lo mismo para las instituciones.

La etnicidad en ambos espacios paso hacer cuestionado de manera diaria, en lo cotidiano. Ese pequeño momento para ver como ellos han construido su etnicidad y, principalmente, como lo están denotando en su práctica diaria. Ya que desde una postura ordinaria se pasaría a asumir ciertas cosas o su generalización, pero lo hechos nos indican una situación bastante heterogenia.

En el caso de la Comunidad de Cantagallo localizado en un espacio urbano nos pareciera denotar que sus estructuras elementales de su cultura estén pasando por un cuestionamiento o una posible crisis, más bien son viviblemente expuestos dando a conocer su etnicidad. Mientras que la Comunidad de Nueva Alianza adscrita a un medio rural se podría asumir que esta mas celosa de su cultura o tiene un fuerte arraigo a ella, pero da señales de un bombardeo cultural y algunos cuestionamientos a su etnicidad; todo ello es traducido con la única finalidad de no querer denotar que son indígenas.

La etnicidad indígena no solo tiene un elemento diacrítico, sino un conjunto de ellos que pueden ser perdidos algunos y remarcados otros. Es decir, aquí los indígenas en los diferentes aspectos de su vida y todos esos elementos diacríticos son visiblemente expuesto; hay otro que son reprimidos o dejados de lado. Y allí radica la contradicción ya que la etnicidad no es una estructura homogénea y consistente, más bien nos parece indicar todo lo contrario.

Estos dos casos nos ponen en cuestión que la etnicidad todavía en un tema complejo. Entonces, más que plantear una teoría sobre la etnicidad o establecer una política lo que se quiere el describir algunos hechos que nos permitan discutir de cómo se va construyendo la etnicidad.

Metodología

La presente investigación, por un lado, formo parte de una investigación mayor, *Proyecto de Conservación y Revaloración del Patrimonio de los Pueblos Cocama-Cocamilla y Urarina*. El trabajo de campo se llevó a cabo en el 2012, en el mes de setiembre y octubre; el cual fue dirigido y ejecutado por el *Grupo Interdisciplinario de Estudios Amazónicos Pora*. Y se tuvo como asesor Dr. James Regan. Se participó como



miembro investigador de dicho grupo. Además, fue auspiciado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Y, por otro lado, algunas de los datos y la información recogida forman parte de la indagación que se realizó para la tesis de licenciatura en antropología en los periodos de abril a junio en el 2010, de junio a diciembre en el 2011 y agosto en el 2012. Para ambos casos se tuvo como herramientas para el recojo de información la observación participante, las entrevistas y los diarios de campo.

Etnicidad y la cotidianidad

Localización

La comunidad de Cantagallo, está localizado en la cuenca del Pacífico y, específicamente, en las orillas del río Rímac. Esta está adscrito jurídicamente a la región de Lima y a las provincias y distrito de Lima y Lima. Su territorio presenta como límites los siguientes puntos: norte con Setame, este con el río Rímac, sur con Piedra Liza y oeste con el cerro San Cristóbal. Y presente como coordenadas geográficas: norte 12° 02' 27.83" S, este 77° 00' 56.18" W, sur 12° 02' 35.95" S y oeste 77° 01' 64" W (Anzualdo, 2016).

Mientras la comunidad de Nueva Alianza está localizada en la cuenca del Amazonas. Tiene como coordenadas geográficas: norte 4° 49' 08.02" S, este 75° 23' 37.05" W, sur 4° 49' 10.83" S y oeste 75° 24' 00.05" W. Además de que su territorio presenta como límites los siguientes puntos: noreste con quebrada de Arosta, suroeste con río Urituyacu, sureste con los ríos Urituyacu y Marañón, y noreste con la Comunidad de Cafetal. Y jurídicamente pertenece a la región de Loreto y a las provincias y distrito de Loreto y Urarinas. (Anzualdo, 2016).

Historia

Por un orden cronológico el territorio de la Comunidad de Nueva Alianza fue siendo ocupada en los 60's por madereros (Aquituari, 2011). Ya para los 70's se viene asentar los primeros pobladores. En 1978 hay una formalización bajo el nombre de Nueva Alianza. Recién en 1996 es que adquiere la condición de comunidad nativa.

La formalización (1978) tenía la intención de demandar una escuela. Se realizó todas las gestiones, además se construyó la casa del docente y la escuela; así como se recaudó el pago de los honorarios del docente. Dicha escuela pasó por un proceso de cambios. Para el periodo de 1978 hasta 1996 estaba bajo la jurisdicción del programa Educación Básica Regular (EIB), mientras que en el siguiente periodo 1997 al 2010



formó parte del programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Para el 2011 hacia adelante forma parte de la EBR.

Este evento (2006 al 2011) está relacionado con el ingreso de mestizos y el regreso de la actividad maderera. En ese periodo la comunidad mantuvo un fuerte vínculo y dependencia de dicha actividad que no solo era en materia económica, sino que incluía aspectos tales como la reciprocidad; por ejemplo, se estableció los padrinos para el colegio y para la familia. Pero donde la balanza, casi, siempre se inclinaba hacia el patrón-padrino. El punto más álgido se dio en octubre, en una serie de reuniones, cuando cuestionaron la condición de ser una comunidad nativa. Indicando que no habían obtenido ningún beneficio de ese estado y mejor sería ser un centro poblado menor y de ese modo recibir un pequeño presupuesto con lo que se puede hacer obras. Estas obras debían mejorar la infraestructura de la comunidad.

Mientras que la Comunidad de Cantagallo fue ocupado desde los 90's por los comerciantes del Mercado Central. Otra migración importante es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonia Peruana (AIDAP) que lo hizo en el 2000 luego de la feria de Todas las Sangres. También está la ocupación de los comerciantes de la avenida Argentina, de los rematistas del Mercado 105 en el año 2003. En ese mismo año se formó una asociación, Nueva Era, con la intención de comprar el terreno, pero por pugnas internas se desintegro.

Posteriormente luego de haber asentado AIDAP toma el nombre de Asociación de Shipibos Residente en Lima (ASHIREL). Para en el 2007 sufre un fraccionamiento y se forma la Asociación de Vivienda de Shipibos en Lima (AVSHIL). Asimismo, estas dos últimas asociaciones tomaron posesión del tercer y segundo nivel, respectivamente.

La consolidación de la educación partió desde la creación de un wawa wasi en el 2003 que evoluciono en el PRONOI *Jesusen bakebo* ambos gestionados por AIDAP. Ya para el 2008 se constituyó la Institución Educativa 'Comunidad Shipiba' que fue gestionada por ASHIREL. Y el hecho de formas filas en la EIB fue gracias a las diligencias de AVSHIL.

Población e infraestructura

Ambas comunidades poblacionalmente hablando están constituidas por mestizos. Esto es una forma local de indicar a las personas que no tienen un origen amazónico ni andino, pero si una mezcla. La comunidad de Nueva Alianza, también, está conformada habitantes de origen étnico cocama-cocamilla que pertenecen a la familia lingüística



Tupi-guaraní. Mientras que en la comunidad de Cantagallo son shipibo-conibo que pertenecen a la familia lingüística Pano.

Las viviendas en la Comunidad de Nueva Alianza están distribuidas de manera típica a los asentamientos rivereños amazónicos que esa a lo largo de los ríos; esto los obliga a tener una infraestructura vial que va paralela al río. El trabajo de Espinosa (1935) nos describe que las viviendas eran multifamiliares. Estas viviendas no presentaban divisiones internas. Estaba compuesta por los fogones a los extremos y en la parte del medio se ubicaban las hamacas. Asimismo, no tenía paredes externas y sus techos llegaban casi al piso.

Actualmente las viviendas de los cocamas presentan divisiones internas y en algunos casos son de dos niveles. Un rasgo bastante resaltante es la separación de la cocina como área independiente del resto de la vivienda. Y en algunos casos hay separaciones para dotar los cuartos individuales para sus miembros.

También, los materiales con los cuales se construye ha variado un poco; hay casas con techos de calamina o con hojas de shapaja, pero casi ya no se amarran los palos. Ahora las uniones se hacen por medio de clavos.

Las viviendas en Cantagallo se habían distribuido por manzanas que conlleva a una sectorización por niveles. El primer nivel, Mercado de Cantagallo, no son propiamente vivienda, sino son más bien puestos de venta. Estos son de metal con puertas enrollables. Pero hay algunas casas de material noble y de madera prefabricada. En el siguiente nivel la gran mayoría de viviendas son de material noble; de una o dos plantas; pero, también, hay casas prefabricadas de madera. Y, en el tercer nivel, principalmente, las viviendas son de madera; son casas prefabricadas; hay algunas de una sola planta u otras de dos pisos.

Organización

La comunidad de Nueva Alianza presenta una organización un poco más tradicional. Desde su fundación como comunidad nativa se ha venido rigiendo bajo un régimen presidencialista. Es decir, al frente está el presidente, luego el vicepresidente, el secretario, el tesoro y los vocales. Es la organización que tiene un mayor peso dentro de la comunidad. Otras instituciones de representatividad son la escuela, seguida del comité de vaso de leche y otras asociaciones de agricultores de café. Pero la escuela es que tiene un mayor peso, las otras son situaciones o estacionales.



La organización en la comunidad de Cantagallo son los frutos de AIDAP, ASHIREL y AVSHIL. Estas son instituciones que gozan de un prestigio. Y presentan una organización bastante sólida de corte presidencialista. Otra institución relevante es la escuela que cada día cobra mucho más peso y es un tema central en las agendas de cada una de las asociaciones.

Medio de comunicación y accesibilidad

La única forma de llevar a la comunidad de Nueva Alianza es por medio fluvial. Para surcar los ríos puede ser por embarcaciones pequeñas, peque-peque, o las grandes, barcos.

Es una comunidad que mantiene una comunidad con el mundo externo relativamente poca. Los formatos por los cuales los hace son la radio, la tv y algunos medios impresos. Pero la tv tiene un gran peso en la vida de ellos. Se ha visto algunos paneles para recibir señal de tv cerrada de movistar o de claro. Es todo un espectáculo cuando las personas se amontonan alrededor.

Mientras que en la comunidad de Cantagallo hay un abanico de medio por los cuales se podía llegar, desde transporte motorizado hasta a pie pasando por un transporte no motorizado (bicicletas, etc.).

El hecho de estar casi en el mismo corazón del Lima metropolitana y a unos pasos de la Casa de Pizarro lo ponen en una situación de bastante conectividad y de fácil acceso. Asimismo, tienen acceso a los diferentes medios de comunicación, ya sea escritos o visuales. Además, las señales de tv y de radio al cual puede acceder fácilmente. Sobre las tv son en algunos casos transmitidas por señal cerrada o de clave.

Actividades económicas

La comunidad de Nueva Alianza está mucho más enraizada dentro de una economía tradicional con una orientación, estacional, al mercado. Dicha comunidad se practica la agricultura tradicional de roza y quema. Se siembra productos tradicionales para su consumo familiar, así como la pesca o caza es orientada netamente para el núcleo familiar y relaciones de intercambio. Pero algunos jóvenes y adultos varones ya han trabajado en las ciudades como Iquitos, Nauta o Yurimaguas; además, en pequeñas cantidades son vendidas productos a las bodegas de los mestizos como aguaje o plátanos.

Mientras que la comunidad de Cantagallo había una serie de empleos esporádicos como en los talleres de confección o de carpintería. También, se tiene actividades como la



artesanía que es muy demandado y que es llevado a cabo por las mujeres; actualmente es el sostén del hogar y en algunos casos son el único ingreso económico (Bariola & Zavala, 2010). Los hombres son empleados en artesanía y en otros oficios que demandan un mayor esfuerzo.

Festividades e imaginario

Las festividades, generalmente, son dirigidas como parte de un calendario escolar. Estas son muy variadas. Se tiene eventos por el día de la madre, del campesino, del árbol, de navidad, etc.; en donde casi toda la población local está participando. Y las comparsas lo hacen por su única vereda en donde queda chico para la gran cantidad de transeúntes.

Sobre el imaginario todavía está presente mitos y leyendas que ejercen cierta presión en las diferentes tomas de decisiones que ellos van hacer. Por ejemplo, el mito de la luna verde. Esto nos dice que en épocas de luna verde no se puede cultivar ni talar ni menos construir la casa. Esto se debe que el cultivo se va pudrir y la madera se va apolillar.

En la comunidad de Cantagallo, es similar, las festividades son casi siempre promovidas por la escuela. Y el calendario es extenso pasando por eventos, como, el día de la madre, del campesino, de la canción criolla, Señor de los Milagros, navidad, etc.; además, de realizar otras actividades como ferias de ciencias y tecnologías, y sus mini olimpiadas. Ya a nivel comunal esta se encarga de hacer festivales musicales en donde hay todo un repertorio de venta de artesanías, de comidas y bebidas típicas, polos y ropas con diseño *kene*, y música.

Sobre mitos y leyendas parece que esta presenta el mito del tunche (Díaz, 2009) y que los pobladores locales lo toman en cuenta. Esto nos indica que puede haber otros mitos o restricciones culturales que pueden tener cierta influencia entre ellos.

Comunicación y lengua

En cada eventos o actividad académica los shipibos de cantagallo siempre están resaltando su lengua. Las banderolas o murales siempre tienen una consigna en shipibo. Esto no solo es propio de estas actividades, sino que forma parte de su cotidianidad. Los diálogos en shipibo se pueden apreciar dentro como fuera del colegio y de las asambleas; estas pueden ser en momentos de crisis (Bariola & Zavala, 2010) o de paz; es oíble, también, en las calles. Puede ser visto en conversaciones de dos o más personas y, también, por teléfono. Asimismo, los llamados o comunicados por el



megáfono son hecho en shipibo y/o castellano. Es decir, el shipibo es una lengua que se usa en espacios públicos como privados, como para temas políticos y cotidianos.

Mientras que en la comunidad de Nueva Alianza la lengua que está en casi todos los espacios es el castellano. Las actividades y eventos son tramitados en castellano, así como las banderolas son en esa lengua. En las reuniones se hace uno del castellano ya se en momentos de crisis o de paz. Los llamados o comunicados que se realizan se hacen en esa lengua. Pero eso no quiere decir que nadie lo hable. Las personas adultas en contextos privados o íntimos lo usan.

Conclusiones

Entender a la etnicidad con una gran variedad de elementos diacríticos y que estos tengan la misma relevancia es muy poco probable. La operacionalidad es un tema pendiente. Pero viendo la etnicidad desde la cotidianidad nos podemos dar cuenta que a lo largo del día dependiendo de las situaciones y de como se esta desarrollando las personas elaboran sus estrategias. Y sobre ellas comienzas sus funcionamientos.

Como se puede ver ambas comunidades tiene muchas cosas en común y varias cosas que los distingue. Ambas se han ido construyendo sus espacios territorialmente, apropiándose. También, han demandado por el desarrollo del servicio educativo y para ello han corrido con todos los gastos. Eso nos dice el interés y la valoración que tiene por la educación ambas poblaciones. Hay una inversión social, económica y de tiempo para cumplir con consolidar la educación en su comunidad.

También, es importante resaltar que una de ellas (comunidad de Nueva Alianza) tiene una economía de subsistencia y las actividades que desarrollo lo orientan hacia estar en contacto con sus tradiciones; poder cazar, pescar, los mitos, relaciones de intercambio, parentesco, tabús, etc. Frente a la otra (comunidad de Cantagallo) que solo pone énfasis en algunos aspectos de su cultura, por ejemplo, en su lengua, en la artesanía y en algunos mitos. Sobre este punto se puede decir que ambas son comunidades de una población indígena. Pero si solo tomamos la lengua solo una de ellas se toma en cuenta, pero si hacen con otros criterios se opaca la otra. Ese es el problema de la operacionalidad.

Otro dato importante es la comunicación y el uso de su lengua materna. Los cocamas hace mucho que lo han perdido y algunas comunidades están pasando por un proceso de revaloración, pero es un proceso largo y complejo. No obstante, hay otras comunidades que se resisten o todavía siguen viendo que deben hacer. La comunidad



de Nueva Alianza está en una situación en donde un sector de la población tiene una intención de reivindicar su lengua y algunas actividades.

Mientras que en la comunidad de Cantagallo la situación es distinta. Ellos buscan constantemente abrir espacios donde puedan usar su lengua materna. Regularmente ellos están inculcando a sus hijos el uso de la lengua shipiba. Mientras otras actividades quedan algo relegadas ya que el mayor peso en revaloración está en la lengua.

Todo ello nos hace pensar que la lengua es entendida por los indígenas y por instituciones internacionales como pieza clave para denotar la etnicidad, y en algunos casos va actuar como el único elemento de identificación étnica. Lo correcto sería abrir el abanico y ver que otros elementos se viene usando, además de los ellos tienen intención de revalorar. Pero dependiendo de las situaciones cada una de las apreciaciones y aspiraciones que se tengan va ser regulada. Es decir, hay una intencionalidad a la hora de poner en juego la etnicidad y eso es visible en la cotidianidad.

Bibliografía

Aikman, S. (2003). *La educación indígena en Sudamérica: interculturalidad y bilingüismo en Madre de Dios, Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Anzualdo, J. (2016). *Identidad y socialización interpretativa en comunidades escolares. Los shipibo de la I.E 'Comunidad Shipiba' del río Rímac (Cantagallo - Lima) y los cocama de la I.E Miguel Acobino del río Urituyacu (Nueva Alianza - Loreto)*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Departamento de Antropología. Lima: UNMSM. Recuperado el 18 de octubre de 2019, de <<https://bit.ly/35d6uUx>>.

Aquituari, A. (2011). *Reseña visita a la Comunidad Nativa Nueva Alianza. Estudio para valorar daño ambiental*. Lima: Centro de Antropología Amazonia y Aplicación Práctica.

Aquituari, A. (2013). *Proyecto de conservación y revaloración de los Pueblos Cocama-Cocamilla y Urarina*. Lima: Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Banco Mundial. (25 de enero de 1999). *Directriz operativa OD 4.2. Concerniente a los pueblos indígenas*. Obtenido de OIT: <<https://bit.ly/3ojVHj9>>.

Banco Mundial. (julio de 2005). *Política Operacional OP 4.10*. Recuperado el 26 de noviembre de 2019, de Banco Mundial: <<https://bit.ly/2Lsmyuw>>.

Barclay, F. (1991). Protagonismo del Estado en el proceso de incorporación de la Amazonia. En F. Barclay, M. Rodríguez, F. Santos, & M. Valcárcel, *Amazonia 1950 - 1990. El extravío de una ilusión*. Lima, Iquitos: PUCP, Terra Nouva.



- Bariola, N., & Zavala, V. (2010). Discurso, género y etnicidad en una comunidad de shipibos en Lima. *Revista Discurso y Sociedad.*, IV (3).
- Belaunde, L. E., Coronado, H., Santacruz, A., & Soldevilla, L. (2005). *Ciudadanía y cultura política entre los awajún, asháninka y shipibo-konibo de la Amazonía Peruana*. Lima: Centro de Antropología Amazonica y Aplicación Práctica.
- Belaunde, L. E., Coronado, H., Santacruz, A., & Soldevilla, L. (2005). *Ciudadanía y cultura política entre los awajún, ashaninka, shipibo-konibo de la Amazonía peruana*. Lima: CAAAP.
- Berger, P., & Luckmann, T. (2003). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Bergman, R. (Economía Amazónica). 1990. Lima: CAAAP.
- Cárdenas, C. (1989). *Los unaya y su mundo: aproximación al sistema médico de los shipibo-konibo del río Ucayali*. Lima: CAAAP, IIP.
- Chirif, A., & Mora, C. (1977). *Atlas de comunidades nativas*. Lima: SINAMOS.
- Cuenca, R. (2009). *Ser indígena en Lima. Familia y niñez indígena en dos barrios limeños*. Lima: IEP.
- Daggett, J., & Wise, M. R. (2008). Las consecuencias sociales de la alfabetización en algunos grupos étnicos de la Amazonía peruana. En Á. Berglio, *Educación intercultural* (Tercera ed., págs. 67-82). Lima: ILV. Recuperado el 26 de noviembre de 2019, de <<https://bit.ly/35c97pV>>.
- Degregori, C. I. (1999). Multiculturalismo e interculturalidad. *Seminario Taller Educación y Diversidad Rural*. Lima: MINEDU.
- Degregori, C. I. (2001). Perú. Identidad, nación y diversidad cultural. En M. Heise (comp.), *Interculturalidad. Creación de un concepto y desarrollo de una actitud*. Lima: Programa FORTE-PE, MINEDU.
- Díaz, M. (2009). *El mito del tunchi y la identidad de los Shipibo-Conibo en Lima: Canta Gallo - Rímac*. Lima: CIDEDEC - UNFV.
- Espinosa, L. (1935). *Los Tupis del oriente peruano. Estudio lingüístico y etnográfico*. Madrid: Ed. Herrando.
- García, A. (2008). Identidades y representaciones sociales: la construcción de las minorías. *Revista Nómades*(18).
- García, F. (1993). *Etnohistoria shipibo. Tradición oral de los Shipibo-Conibo*. Lima: CAAAP.
- Gugenberger, E. (2005). Dimensiones del espacio lingüístico y su significado para los hablantes. Una contribución a la lingüística migratoria en el ejemplo del Perú. En H.



Olbertz, & P. Muysken (eds.), *Encuentros y conflictos. Bilingüismo y contacto de lenguas en el mundo andino* (págs. 97-124). Madrid: Vervuert-Iberoamericana.

Howard-Malverde, R. (1996). Interculturalidad vivida. Testimonios de mujeres desde el norte del Potosí. En J. C. Godenzzi (comp.), *Educación e interculturalidad en los andes y en la amazonía* (págs. 115-137). Cusco: CBC.

INDEPA-UIGV. (2009). *La cosmovisión shipibo-conibo en la asociación de Shipibos Residentes en Lima - ASHIREL*. Lima: INDEPA, UIGV.

INEI. (2010). *Perú. Análisis etnosociodemográfico de las comunidades nativas de la amazonía, 1993 y 2007*. Lima: INEI, UNFPA. Recuperado el 26 de noviembre de 2019, de: <<https://bit.ly/2MBJ2Kq>>.

Kennedy, L. (2011). La pobreza móvil de los migrantes Shipibo-Conibo: una investigación de la influencia de la migración en la cosmovisión Shipibo-Conibo de Canta Gallo_Rímac, Lima. *ISP Collections. Papers 1080*.

Moscoso, L. (2010). Educación intercultural bilingüe. Entender(se) a (en) Lima. Los estudiantes Shipibo-Konibo de Ucayali y sus estrategias de aprendizaje y uso del castellano en Lima y en sus escuelas. *Congreso Iberoamericano de Educación*, (págs. 1-15). Buenos Aires.

Moya, R. (2007). *Participación social, banca multilateral y educación intercultural bilingüe: Bolivia, Ecuador y Perú*. Lima: CARE-PERÚ.

OIT. (2014). *Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales*. Lima: OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Recuperado el 26 de noviembre de 2019, de: <<https://bit.ly/3omfn5K>>

Pozzi-Escot, I. (1991). Ideas y planteamientos propuestos en el desarrollo y debates de la educación bilingüe en el país. En L. E. López, I. Pozzi-Escot, & M. Zúñiga, *Educación bilingüe intercultural: reflexiones y desafíos* (págs. 121-147). Lima: FOMCIENCIAS.

Rodríguez, M. (1991). Proceso de ocupación y construcción social del espacio amazónico. En F. Barclay, M. Rodríguez, F. Santos, & M. Valcárcel, *Amazonía 1950-1990. El extravío de una ilusión*. Lima, Iquitos: PUCP, Terra Nouva.

Solís, G. (2001). Interculturalidad. Encuentros y desencuentros en el Perú. En M. Heise (comp.), *Interculturalidad. Creación de un concepto y de desarrollo de un actitud*. Lima: Programa FORTE-PE, MINEDU.

Stocks, A. (1981). *Los nativos invisibles. Notas sobre la historia y la realidad actual de los cocamilla del río Huallaga, Perú*. Lima: CAAAP.

Tournon, J. (2002). *La merma mágica. Vida e historia de los Shipibo-Conibos del Ucayali*. Lima: CAAAP.



Trudell, B. (2008). El ILV y la educación bilingüe en el Perú. Una perspectiva. En Á. Berglio, *Educación intercultural* (tercera ed., págs. 19-34). Lima: ILV. Recuperado el 26 de noviembre de 2019, de: <<https://bit.ly/3baDaSD>>.

Tubino, F. (26 de noviembre de 2019). *Del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico*. Obtenido de Red PUCP: <<https://bit.ly/2LppZII>>.



Projeto político decolonial e arranjos transmodernos.

Gênero e etnicidade no movimento zapatista.

Cristian Jobi Salaini
Laura Marquesan Eschberger

Resumo

Tomando como marco central a insurreição zapatista após a homologação do NAFTA, este artigo busca identificar as principais reivindicações elaboradas pelas mulheres do movimento, a fim de compreender como a etnicidade e o gênero dialogam na construção dessa nova narrativa. A partir de uma leitura teórica crítica à colonialidade, busca-se apontar como a mesma se manifesta dentro do contexto mexicano e como as ações das mulheres zapatistas reforçam as reivindicações étnicas ao mesmo tempo em que tensionam os discursos feministas de matriz ocidental. Sendo assim, o presente artigo tem o intuito de analisar como a presença das mulheres dentro do EZLN fez com que o mesmo se tornasse um importante ator nas práticas antissistêmicas, um projeto transmoderno que desafia os limites da modernidade colonial.

Palavras chave

EZLN; Movimento indígena; Colonialidade; Mulheres zapatistas.

Introdução

No decorrer da história mexicana, a questão indígena, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento cultural e à demarcação de terras, manifestou-se de diferentes formas. O Movimento Zapatista, inicialmente, buscava mostrar o descontentamento dos povos indígenas e do trabalhador rural em relação à expropriação de terras ocorrida no período porfirista. Além disso, foi a expressão mais concentrada da rebelião das massas camponesas que se espalhou pelo território mexicano e lutou contra o porfirismo, o maderismo, o huertismo e, por fim, contra o carrancismo (GILLY, 2013). Contudo, chegada a comemoração dos 500 anos do “descobrimento” das Américas, o Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) – que é uma organização político-militar, majoritariamente indígena – organizou uma grande consulta popular, que tinha o intuito de saber se a população se mostrava favorável ou contra o combate. Tendo uma resposta positiva, em 1993, os indígenas assumem o controle militar do EZLN e formam o Comitê Clandestino Revolucionário Indígena (CCRI). Na época, Carlos Salinas (1988-1994), o então presidente do México, reformou o artigo 27, colocando fim a qualquer possibilidade de Reforma Agrária.



Ademais, começou a discutir sobre a entrada do México no NAFTA, que, como ele mesmo dizia, seria “a entrada do México no primeiro mundo”. Este foi o momento crucial para a insurreição zapatista.

Desde o levante armado do EZLN em 1º de janeiro de 1994, após homologação do NAFTA, o Movimento Zapatista tem buscado revisar os papéis de gênero no cotidiano das comunidades indígenas e dentro da sociedade mexicana, tendo como marco inicial a publicação da Ley Revolucionaria de Mujeres. A partir do slogan “Ya Basta! Nunca más um México sin nosotros”, o EZLN passou a cobrar um maior reconhecimento indígena por parte do Estado e a atuar como um catalisador das demandas das mulheres indígenas por uma maior representação feminina dentro do Movimento. Sendo assim, o trabalho em questão propõe-se a analisar como essas mulheres, que são vistas como “não-sujeitos” pelo Estado e pela sociedade, desenvolveram um projeto em resposta ao colonialismo e como ele atuou como um projeto transmoderno (DUSSEL, 2016). Neste sentido, procurar-se-á evidenciar aqui um projeto de releitura da modernidade através dos parâmetros e cosmovisões indígenas. Nosso aporte conceitual versa sobre a chave de leitura decolonial. Portanto, temos como eixo estruturante a dimensão da colonialidade do poder (QUIJANO, 2005) sem, contudo, deixar de levar em consideração os avanços críticos com relação a este último conceito, que podem ser condensados no aporte heurístico trazido pela colonialidade do gênero (LUGONES, 2008). Esta premissa faz-se fundamental ao entendimento do presente trabalho, já que o esquadrinhamento colonial (branco, capitalista, heterossexual) retirou as mulheres indígenas de seus locais políticos, rituais e de produção epistemológica, e as reduziu ao local de subalternidade e animalidade.

Buscamos identificar as principais reivindicações presentes nos discursos dessas mulheres dentro do Movimento e compreender como os aspectos da etnicidade influenciaram na construção dessa nova narrativa crítica à colonialidade. Ademais, destaca-se a importância do debate sobre os aspectos étnicos dentro do próprio movimento feminista, que desconsidera muitas vezes as questões que fogem do ideal monocultural eurocêntrico. Desta forma, a presença das mulheres zapatistas dentro do EZLN fez com que o mesmo se tornasse um importante ator nas lutas antissistêmicas em decorrência do seu caráter transmoderno, ou seja, como uma prática de resistência a partir de uma leitura indígena sobre a modernidade.



Marcos decoloniais, transmodernidade e colonialidade de gênero

Ao longo do século XX, autores como Edward Said, Gayatri Spivak e Homi Bhabha iniciam um debate pós-colonial, no qual buscavam analisar o mundo sob uma perspectiva das ex-colônias. Said, quando insere na discussão questões ligadas à ideia de Orientalismo, isto é, da construção da imagem do mundo islâmico sob uma perspectiva europeia, busca mostrar que o “Oriente não é um fato inerte da natureza” (Said, 2003). Apesar de existir de fato diferenciações étnicas, raciais, culturais e religiosas entre os povos europeus e os povos árabes, a criação do Oriente e do Ocidente é uma forma de distinguir ambos ontológica e epistemologicamente, com a premissa de que os povos orientais são inferiores e que, portanto, caberia aos europeus civilizá-los. Fato este que vai de encontro à ideia de Gayatri quando questiona “Pode o Subalterno Falar?”. A autora indiana buscou através da sua obra apontar a dificuldade de se articular um discurso de resistência fora do ambiente hegemônico, pois o discurso daquele que faz parte da periferia é irrelevante, é como se o poder de fala e de autor-representação fosse um direito concedido apenas aos europeus (Spivak, 2010).

Bhabha, por sua vez, possui um debate sobre o ideário construído em relação ao Outro, a partir de uma perspectiva de “apropriar-se e apoderar-se”. Para o autor, também indiano, não há um local da cultura, pois ela já transcende as fronteiras físicas e, portanto, essa busca por autenticidade é infecunda, afinal as culturas dialogam e influenciam umas às outras, pois, segundo ele: “culturas são construções e as tradições, invenções” (Bhabha, 1998).

Porém, quando se fala em pós-colonialismo, há duas perspectivas suscetíveis à interpretação, uma que diz respeito ao período histórico posterior às colonizações europeias no chamado “Terceiro Mundo”, e a outra ligada às contribuições teóricas que surgiram e ganharam espaço na academia a partir de 1980. Entretanto, alguns autores e autoras latino-americanos questionam a existência desse “pós-colonialismo”, exaltando que a colonização nunca foi erradicada de fato, que ela se mantém até os dias atuais atuando de maneiras distintas. Com isso, surge a ideia de repensar o Sistema Mundo de Wallerstein a partir de uma ótica daqueles que não estão em uma posição dominante (Ballestrin, 2013). Logo, o que se pode apontar é que há uma linha tênue que divide ambas teorias e que está suscetível a diversas interpretações, o que torna o apontamento da diferença entre o que é pós-colonial e o que é decolonial complexo e inexacto.



Ademais, o que se pode perceber é que ambas teorias têm em comum a tentativa de buscar contradições dentro deste imaginário europeu no qual o outro é visto como inferior, como o sem cultura, sem conhecimento e sem religião. Isto é, foi percebido que havia uma naturalização da estrutura hierárquica da sociedade, que gera um silenciamento e uma invisibilização dos saberes e das perspectivas de mundo daqueles que foram colonizados a partir deles mesmos.

O que se aponta também é que esse modelo colonial/moderno triunfou, pois conseguiu fazer com que o sujeito socialmente oprimido pensasse epistemologicamente como aqueles que estão oprimindo, isto é, que eles se alinhassem aos discursos liberais e mantivessem assim um determinado nível de dependência com os países “desenvolvidos”. A colonialidade, portanto, diz respeito ao fato de que não é a independência formal do território nacional que define o processo de descolonização. Embora tenha-se erradicado o modelo das administrações coloniais e das estruturas político-econômicas da época, os povos não-europeus continuam sendo explorados pela atual divisão internacional do trabalho. Portanto, busca-se através dos estudos decoloniais, transcender as dicotomias delineadas no sistema capitalista, pois este mantém a “matriz do poder colonial” e uma visão eurocêntrica de desenvolvimento e progresso que silencia questões particulares de cada território, como questões étnico-raciais, de gênero e culturais (Grosfoguel, 2008).

A partir desse espectro, deve-se mencionar a ideia de transmodernidade de Dussel, que nada mais é do que a ideia da diversidade como projeto universal. Ao invés de seguir o desenho de democracia das antigas metrópoles, seriam criadas diversas respostas aos problemas da modernidade, gerando um diálogo transversal entre os críticos de cada cultura, entendendo que existe uma assimetria entre os diferentes atores (Dussel, 2001). O que Dussel aponta é que não se pode ter uma visão ingênua e monolítica de cultura, pois há assimetrias no sistema que não podem ser ignoradas. A ideia do debate intercultural nada mais é do que identificar as fraturas internas, dentro de cada cultura, e entre elas, ou seja, as relações de dominação e subordinação. Com isso, é possível ultrapassar a visão multicultural altruísta, na qual se presume a aceitação de costumes e princípios ocidentais, tidos como corretos, e que constituem a modernidade e, por consequência, o colonialismo intrínseco ao Sistema Mundo. Logo, a transmodernidade seria este processo de revisão e ressignificação de cada cultura, entendendo as assimetrias das estruturas sociais e questionando a visão “standard”, que na maioria das vezes é eurocêntrica. Isto é, não se busca superar as práticas ancestrais, tampouco



negar a modernidade, o que se constrói é um vaso comunicante atemporal, no qual há a incorporação do discurso indígena nos modelos modernos de se fazer política, que é a ideia do “mandar obedecendo” no caso Zapatista.

A própria ideia de raça é uma construção oriunda do processo colonial, no qual se cria distinções baseadas nas diferenças fenotípicas dos conquistados, por raça e cor, dando origem à ideia de superioridade de uma raça sob a outra. Desse modo, cada raça é atribuída a um lugar social dentro de uma estrutura de trabalho, na qual o homem branco europeu sempre ocupa o papel de dominação. Logo, a ideia de raça se torna a maneira de outorgar a dominação europeia sobre os outros povos e “naturalizar” o sentimento de superioridade, como se a estrutura da sociedade fosse orgânica, como exalta Quijano (2000):

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial de poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular do dito padrão de poder e opera em cada um dos planos, âmbitos e dimensões materiais e subjetivas, da existência social cotidiana e da escala social. Origina-se e mundializa-se a partir da América (Quijano, 2000, p. 342).

Lugones (2008) produz um diálogo crítico com a obra de Aníbal Quijano. Ainda que este último tenha se debruçado nas relações entre a construção da raça – enquanto elemento fictício – e a dimensão da colonialidade do poder, a mesma ênfase não teria sido relevada com relação à colonialidade de gênero, tendo em vista que, segundo Lugones, o autor acaba por focar apenas o lado visível/não oculto do gênero nas relações que compõem a colonialidade do poder. Neste sentido, ainda que Quijano tenha revelado a “novidade” da construção colonial da “raça”, o gênero ainda se apresenta demasiadamente reificado, biologizado e baseado na noção de dimorfismo sexual. Esta dimensão, longe de se apresentar enquanto alegórica, está colocada na própria base fundacional do sistema moderno/colonial e no modus operandi do modelo capitalista. Portanto, este lado “não visível”/oculto das relações de gênero impostas pelo sistema de inculcamento colonial nos revela uma séria de sociedades pré-colombianas que definiam papéis de gênero através de mecanismos outros de aferição social (papéis desempenhados perante o grupo, por exemplo) e nos quais a existência de um terceiro gênero e a homossexualidade eram amplamente reconhecidos. Espaços antes dominados pela noção de complementaridade e dualidade, no que diz respeito às relações de gênero, acabam por ser “patriarcalizados”, confinando as mulheres estritamente ao âmbito privado. Portanto, se “raça” se apresenta enquanto ficção, o



mesmo pode-se dizer com relação ao gênero. Nesta direção, a modernidade colonial é branca e, sobretudo, patriarcal e heterossexual (LUGONES, 2008). Portanto, as mulheres “não brancas” são destituídas de seus papéis rituais, políticos e de produção de conhecimento e são jogadas no âmbito da animalidade, do sexo forçado com os colonizadores brancos e da exploração laboral violenta.

Gênese do Movimento Zapatista e Neozapatista

Inicialmente, o Zapatismo surge como um movimento que mostrava o descontentamento dos povos indígenas e do trabalhador rural em relação a expropriação de terras ocorrida no período porfirista, trazidas na Revolução Mexicana como propostas de Madero, mas que nunca foram de fato efetivadas. Além de ter sido a expressão mais concentrada da rebelião das massas camponesas que se espalhou pelo território mexicano e lutou contra o porfirismo, o maderismo, o huertismo e, por fim, contra o carrancismo, o movimento se tornava cada vez mais independente. O marco da emergência do Zapatismo como movimento à parte se deu com o Plan de Ayala, redigido por Emílio Zapata e Otilio Montañó; este, por sua vez, representava a ruptura da aliança com Madero e a destruição das bases do capitalismo, demandando reforma, liberdade, justiça e lei e, sobretudo, a restituição e nacionalização das terras indígenas expropriadas (Gilly, 2013).

Ademais, a região de Chiapas foi palco de diversos eventos marcantes na luta indígena. Já durante o período de derrubada de Díaz, esta região foi onde eclodiu a Revolução Agrária do Sul, questionando a ausência de terras para semeadura, a falta de representação e de identificação com os líderes do governo. Zapata e Montañó não se contentavam apenas com a mudança de governador, a luta era por uma mudança social que representasse os camponeses e os indígenas também, com o elemento organizador dos povos e sob a perspectiva “*decidir desde bajo*”, ou seja, com uma sociedade articulada, na qual haja um diálogo entre a população e o governantes (Speed, 2006).

Esta luta ininterrupta no Sul-Sudeste do país, que permaneceu e resistiu aos mais diversos governos ao longo dos anos, foi se aprimorando. Nas décadas de 60, 70 e 80 do século passado, houve mudanças marcantes para o Movimento. Nos anos 60, o Bispo Samuel Ruiz – importante figura em Chiapas e que depois foi, juntamente com Rigoberta Menchú, responsável pela mediação entre o EZLN e o PRI – inicia um processo de ensinamento da teologia da libertação que, sob uma leitura católica, fala sobre a libertação dos oprimidos. Vale ressaltar que a Igreja Católica teve um importante



papel na promoção de espaços de reflexão, onde se discutia a opressão de determinados grupos, as desigualdades sociais e o racismo, levando as mulheres indígenas a questionarem o seu próprio espaço dentro da comunidade. Os movimentos estudantis que ocorrem no México em 1968 coagulam organicamente o movimento indígena, que passa a ser denominado Neozapatismo. Este emerge nos anos 70, questionando não tão somente as questões da reforma agrária, mas também a homogeneidade mestiça da nação, a ideia de uma monocultura, com valores e costumes compartilhados, que reafirmavam os ideais coloniais (Speed, 2006).

Em 1994, quando o Movimento Neozapatista saiu da clandestinidade e declarou guerra contra o governo mexicano, foi publicada e lida em público a Primeira Declaração da Selva Lacandona. Esta tinha como tema central das demandas indígenas: trabalho, terra, teto, alimentação, saúde, educação, independência, liberdade, democracia e paz. Todas estas questões, além de remeterem à proposta inicial de Zapata com o *Plan Ayala*, são questões intrínsecas à cosmovisão indígena.

Este modelo fundado na construção e integração do poder a partir da sociedade até o representante da mesma tem como origem o pensamento político filosófico *tojolabales*, um dos povos que vive na região de Chiapas, predominantemente na região das Las Margaritas, e faz referência a símbolos e questões religiosas da sabedoria Maya. As ideias do eu e do outro interconectados com a coletividade, de “mandar obedecendo” e de um mundo formado por muitos mundos são, na verdade, fruto da cosmovisão indígena, das maneiras de vivenciar, compreender e expressar a realidade destes povos ancestrais (Rojas, 2015).

Segundo a cosmovisão maya, não se luta por uma reparação agrária, mas contra a mercantilização da terra, da Madre Tierra. “*La tierra no se vende, se ama y se defende*” (EZLN) dizem os zapatistas, pois ela é a provedora de vida. Não se luta por mais empregos, mas tudo tem que ser fruto do trabalho de cada um, quando não se trabalha, não se come, assim não há exploração econômica. A liberdade e a independência zapatistas defendem a autonomia global, o poder de decisão de cada povo para construir o seu futuro e a sua sociedade do seu modo e a separação do Movimento frente ao Estado, partidos e todas as formas de controle, imperialismo e cooptação. A paz, no sentido de que seja posto um fim na guerra contra os indígenas, contra o seu despojo por toda a América Latina, pois aqueles que não servem para o funcionamento capitalista, seja como consumidores ativos ou produtores, são eliminados (Rojas, 2015).



Estas são as bases da ideia da reciprocidade, do dar e receber, que, apesar de ser uma tradição milenar, foi adaptada à atualidade, podendo ser usada como exemplo de transmodernidade. Não se nega o passado nem se busca superá-lo, pois as tradições ancestrais não são consideradas inferiores, é um ciclo atemporal, no qual se agrega novas perspectivas às visões antigas, isto é, uma forma de fazer política diferente das que já estão degradadas. O Movimento, portanto, ao longo do tempo se modifica tornando-se algo com uma abrangência muito maior e que questionava não apenas a efetivação das leis e a expropriação das terras indígenas, mas a compreensão monolítica do Estado como uma nação, um povo e uma identidade coletiva, que é uma visão equivocada. Como Boaventura define, torna-se uma luta epistemológica de saberes. Isto é, ao defender o ensino e reconhecimento da sua cultura e dos seus dialetos, ao questionar o modelo de democracia e da estrutura econômica vigente, não se está lutando contra o governo, mas contra a colonialidade presente e naturalizada na sociedade (Quijano, 2005). Ou seja, o neozapatismo serviu como uma ferramenta de auto-afirmação sobre as origens destes povos e de luta pela permanência das suas tradições.

É nesta questão que reside a magnitude do Movimento na reconstrução da história mexicana, na incorporação do discurso indígena nos modelos modernos de se fazer política, que foi o que fez com que os zapatistas tivessem tamanho destaque nas lutas antissistêmicas globais. A transformação do Movimento Zapatista para o Neozapatismo ocorre a partir da superação da visão monolítica de cultura arraigada no Estado, passando, inicialmente, por um processo afirmativo sobre a sua identidade

– superando a ideia tradicionalista de recuperar as tradições ancestrais sem questioná-las, adotando um comportamento anti-moderno, mas também superando a ideia liberal de ser moderno e negar o passado como se ele fosse inferior, para depois buscar compreender de que modo se pode reconstruir o legado indígena.

A transmodernidade, portanto, seria a resposta aos desafios da modernidade desde outro lugar, o lugar das experiências culturais da exterioridade, ou seja, que são distintas das europeias, baseada em um debate intercultural transversal. Com isso se estabelece uma ponte atemporal, na qual se reconstrói a identidade latino-americana diagnosticando o conteúdo das suas próprias narrativas, como apontado por Dussel (1998):

Transmodernidade indica todos os aspectos que se situam “mais para lá” (e também “anterior”) das estruturas valoradas pela cultura moderna europeia e norte-americana, e



que estão vigentes no presente nas grandes culturas universais não- europeias e que se colocam em movimento para a criação de uma utopia pluridiversa (tradução da autora, Dussel, 2016).

Este processo de libertação do movimento ocorria de dentro para fora, seguindo o princípio de “limpar a própria casa”, isto é, em vez de se enfrentar as opressões externas, a luta é iniciada dentro do próprio Movimento, como expresso neste trecho de Dussel (2007): “O zapatismo era, desde o começo, uma revolução dentro das revoluções, e a revolução das mulheres zapatistas, uma revolução dentro do zapatismo e do povo maya” (DUSSEL 2007). Ou seja, primeiramente, era questionado o papel da mulher dentro da comunidade indígena, e a partir deste trabalho de empoderamento interno, iniciava-se uma luta contra o capitalismo e os seus impactos nas populações originárias. Tendo isto em vista, o Neozapatismo serve como um catalisador das demandas das mulheres indígenas e atua como um mecanismo de mudança da posição delas na sociedade, permitindo que elas ocupem posições de tomada de decisão e que as visões arraigadas na constituição social sobre vulnerabilidade e marginalização, que muitas vezes institucionaliza o discurso que exclui as mulheres do cenário político, sejam combatidas (Hernández; Paz; Sierra, 2004).

Atuação das mulheres indígenas dentro do Movimento Zapatista

No meio rural e de acordo com as tradições mayas, a relação entre ambos os gêneros era sustentada no princípio da complementariedade e da reciprocidade. Isto é, havia uma cooperação na relação familiar, o homem cuidava das terras e dos animais e a mulher das crianças e da casa. Ao entrar em contato com os europeus durante o período colonial, ocorre uma mudança na estrutura social das populações nativas, modificando esse ideário de complementariedade e produzindo uma ideologia que é baseada na hierarquização, resultando em uma subordinação feminina e em uma designação do seu trabalho para a esfera privada. Além disto, o avanço da modernização, seguido da crise econômica vivida no México no século XX, aliados ao aumento da integração das comunidades indígenas baseadas na monetarização, resulta em uma ruptura ainda maior do equilíbrio das relações familiares. Com isto, a importância do trabalho do homem fica mais visível, pois é a única fonte de renda, o que acaba potencializando a ideia da superioridade masculina.

Todavia, as mudanças sociais e políticas na segunda metade do século XX encorajam uma participação feminina maior. Em 1950, em uma tentativa de desenvolver o país economicamente, o governo incentiva a ocupação da Selva Lacandona e, com isto,



muitos indígenas que se encontravam sem ou com pouca terra para semeadura, migram para esta região. São formadas comunidades multiétnicas, fruto da integração de diferentes povos originários que migraram para a região, construindo uma população com um entendimento mais diverso de organização comunitária e social, pois há mais diálogo e uma troca de conhecimento e tradições entre as diferentes etnias. Contudo, fica evidente que há um problema central compartilhado por toda a população originária: a pobreza e a escassez de terras. Esta comunidade híbrida é mais articulada e tem um senso de unificação maior que o das comunidades tradicionais, tal como uma estrutura social distinta, pois com a diversificação das oportunidades de trabalho e a diminuição da presença masculina nessas comunidades, iniciava-se um processo de criação de comitês religiosos e de discussão de mulheres indígenas (Balso 2008). A Igreja Católica tem um papel importante neste processo, com o desenvolvimento de espaços de discussão sobre Teologia da Libertação, pois, ao colocar em pauta as formas de opressão enfrentadas pela sociedade e discutir sobre formas de se libertar, estas mulheres começam a refletir sobre o seu próprio espaço dentro da comunidade e da esfera pública. Com o aumento do contato com outras mulheres indígenas e a atuação de ONGs, que iniciam um trabalho de conscientização do espaço da mulher na sociedade em zonas rurais, cria-se um espaço de reflexão feminino, paralelo ao início de um processo de questionamento do discurso homogêneo do Estado, dos ideais monoculturais e do etnocentrismo. Vale ressaltar, todavia, que apesar disto as mulheres permaneciam sem ter um espaço nos processos de tomada de decisão, atuando apenas como acompanhantes ou no suporte (Hernández Castillo, 2002).

A partir de 1990, emerge um Movimento Feminista Indígena mais bem estruturado e unido em diferentes países da América Latina. No México, a instituição de um Movimento Nacional foi decisiva neste processo. Havia sido criados alguns grupos de pesquisa e discussão sobre a violência sexual e doméstica, denominados *Centro de Investigación y Acción para la Mujer* (CIAM) e o *Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas*, ambos com um papel importante na academia, dando uma maior visibilidade à situação da mulher indígena. Em 1997, é realizado o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Indígenas, que tinha como nome “Construindo a nossa história” e contou com mais de 700 mulheres presentes. O resultado foi a criação do *Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas* (CNMI), que era composto por mulheres de mais de 20 comunidades distintas e buscava aumentar o poder de liderança das mulheres dentro da comunidade sob uma perspectiva de gênero, o estabelecimento de uma rede de



comunicação em âmbito nacional, a propagação dos Direitos Humanos, entre diversas outras questões (Hernández Castillo, 2002).

O EZLN serviu, portanto, como um catalisador das demandas das mulheres indígenas. Já no dia da sua aparição foi publicada a *Ley Revolucionaria de Mujeres*, contendo dez artigos com os direitos das mulheres e carregando uma simbologia muito forte, pois era a primeira vez que as demandas dessas mulheres eram expostas para a sociedade tanto dentro do México, como no exterior. Era a primeira vez que esta tentativa de releitura da cultura indígena, em uma tentativa de adaptá-la ao século XX e XXI era colocada em pauta, criticando o que pudesse ser revisado, enquanto expunha com orgulho o pertencimento à cultura indígena (Hernández Castillo, 2002).

Todas as questões trazidas nas Leis das Mulheres são revisadas anualmente visando identificar a evolução das mudanças. Além disso, as mulheres estão cada vez mais criando fundações, buscando se organizar no combate à desigualdade de gênero, preservando a ênfase tradicional da responsabilidade social, interdependência econômica entre os membros da família e força espiritual como uma conquista coletiva e não pessoal. Estas questões têm fundamental importância na luta zapatista e são a aplicação dos pilares teóricos na prática, isto é, esta revisão das tradições indígenas e busca por uma mudança estrutural nas relações de gênero, baseadas em uma autoafirmação do ser indígena. Com isto, cria-se um diálogo transmoderno que faz uso justamente da etnicidade para incluir o discurso indígena nos debates modernos, neste caso, sobre os direitos das mulheres.

Logo, a atuação das mulheres na luta zapatista pode ser dividida entre a presença militar no exército, nas mobilizações e organizações sociais ou nos espaços discursivos sobre a situação das mulheres indígenas. As mulheres que optaram por participar da parte militar como insurgentes ou milicianas escolheram opor-se a construção social de virilidade masculina, isto é, subverter a lógica de que este seria um espaço masculino no qual a mulher não poderia participar. Atualmente, cerca de 30% do EZLN é composto por mulheres e utilizam o anonimato como estratégia defensiva para proteger suas famílias e despersonalizar o movimento, dando um senso de coletividade e igualdade maior ao mesmo (Nascimento, 2012). Vale ressaltar que diversas vezes durante as ofensivas militares do governo as mulheres formaram barreiras com os seus próprios corpos para proteger a sua comunidade e a terra, o que por si só já representava uma afronta ao status quo, como explicita Speed (2006):



O gênero destas envolvidas no confronto sublinhou a mensagem que os Zapatistas queriam enviar: desarmadas, calmas e de um povo bravo (representado pelas mulheres) desafiando um governo poderoso e injusto (representado pelos militares, homens especializados em violência). A imagem dos homens zapatistas encarando a mesma força militar não teria sido tão efetiva (tradução da autora; Speed, 2006).

Ainda assim, estas mudanças são graduais e ainda há muitas dificuldades no cotidiano destas mulheres, até mesmo daquelas que optaram por lutar. Um passo muito significativo neste processo foi a candidatura de María de Jesús Patricio Martínez, a Marichuy, para a presidência em 2017. Com o apoio do CNI, sendo a representante política do EZLN e desvinculada de qualquer partido político, Marichuy recusou quaisquer financiamentos para a sua campanha. Este caso é, na verdade, um ótimo exemplo para apontar como a figura feminina é utilizada como símbolo de subversão dentro do Movimento, isto é, seguindo a própria lógica da transmodernidade, uma luta de gênero dentro da resistência indígena, como forma de fazer uma (re)apresentação e uma releitura das tradições destes povos. Na relação da etnicidade com o feminismo das mulheres zapatistas, há uma luta de via dupla, sendo uma parte contra o etnocentrismo do feminismo ocidental e a outra contra o existencialismo étnico, que adota um comportamento estático e inflexível.

Seguem ultrapassando as dicotomias de modernidade e tradição, direitos individuais e direitos coletivos, que é justamente onde está a questão da transmodernidade, como apontado durante o Congresso dos Direitos das Mulheres em nossos Costumes e Tradições:

Nós fomos ensinadas desde a nossa infância a fazer o que nos mandam, a nos silenciar, a cooperar, a permanecer calada, a não participar. Mas nós não queremos mais permanecer para trás: nós não queremos que caminhem em cima de nós. Nós demandamos respeito como indígenas e como mulheres. Nós demandamos que os nossos direitos sejam respeitados. Nós queremos ser respeitadas pelas nossas tradições, aquelas que sejam benéficas para todas as mulheres, homens e crianças. Nós precisamos também pensar sobre a necessidade de refazer nossas tradições. A Lei (as nacionais) deveria proteger somente aquelas tradições e caminhos que sejam substancialmente benéficos para a comunidade. Nossas tradições não devem mais machucar. As mulheres indígenas estão demandando uma mudança cultural e na comunidade, para que sejam encaixadas como o sujeito feminino que no presente elas querem ser (tradução da autora; SPEED 2006).



Considerações Finais

Logo, as questões trazidas para o debate pelas mulheres zapatistas transcendem a discussão sobre feminismo, assim como ultrapassam a discussão usual sobre indigenismo. O envolvimento das mulheres no processo de construção, organização, liderança e luta nas zonas autônomas foi extremamente importante, não apenas por questões práticas, mas pela simbologia que o seu corpo representa. Operacionalizar a autonomia de Chiapas, revitalizando as interpretações sobre os costumes e tradições de uma forma em que estes pudessem fazer parte de um discurso indígena dentro do contexto da modernidade é o que faz com que o Movimento se mostre como uma alternativa política para o México mais diverso e representativo. Além de conseguir fazer com que as suas demandas tenham voz e ecoem mundialmente nos debates feministas, contrastando com as questões trazidas pelas mulheres brancas e dando mais espaço para as mulheres que se encontram marginalizadas até mesmo pelo movimento feminista, modificando a estrutura universalizante do mesmo.

Referências Bibliográficas

- Ballestrin, Luciana. *América Latina e o giro decolonial*. Revista Brasileira de Ciência Política, [s.l.], n. 11, p.89-117, ago. 2013. FapUNIFESP (SciELO).
- Balso, Amanda del. *Zapatista Women Warriors: Examining the Sociopolitical Implications of Female Participation in the EZLN Army*. 2008. 85 f. Tese (Doutorado) - Curso de Artes e Ciências, Boston College University, Boston, 2008.
- Bhabha, Homi K. *O local da cultura*. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998.
- Dussel, Enrique. *Transmodernidade e interculturalidade: interpretação a partir da filosofia da libertação*. *Sociedade e Estado*, [s.l.], v. 31, n. 1, p.51-73, abr. 2016. FapUNIFESP (SciELO).
- _____, Enrique. *Filosofia de la Liberacion*. 7. ed. México: Primero, 2001.
- _____, Enrique. *En búsqueda del sentido (origen y desarrollo de una filosofía de la liberación)*. *Anthropos*, n. 180, p. 13- 36, 1998.
- Gilly, Adolfo. *La Revolución Interrumpida*. Primeira edição digital. México: El Cabalito, 2013.
- Grosfoguel, Ramón. *Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós- coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global*. *Tabula Rasa*, Bogotá, n. 04, p.115-147, jan. 2008.
- Hernández Castillo, R. Aida. *Zapatismo and the Emergence of Indigenous Feminism*. *Nacla*, New York, v, n. 6, p.39-59, 2002.



Hernández, Rosalva Aída; PAZ, Sarela; SIERRA, Maria Teresa. *El Estado y los indígenas en los tiempos del PAN: neindigenismo, legalidad e identidad*. Ciesas: México, 2004.

Lugones, María. Colonialidad y género. *Tabula Rasa*. Bogotá - Colômbia, No.9: 73- 101, 2008.

Nascimento, Priscila da Silva. *Mulheres zapatistas: poderes e saberes. Uma análise das reivindicações das mulheres indígenas mexicanas na luta por seus direitos – anos 1990*. 2012. 187 f. Tese Doutorado em Ciências Sociais, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2012.

Quijano, Aníbal. *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais*. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005.

Rojas, Carlos Antonio Aguirre. *El significado del neozapatismo mexicano dentro de los movimientos antisistémicos actuales. Teoría y Praxis*, San Salvador, 2015.

Said, Edward. *Orientalism*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

Speed, Shannon. *Dissident Women: Gender and Cultural Politics in Chiapas*. 2006.

Louann Atkins Temple Women & Culture. University of Texas Press.

Spivak, Gayatri Chakravorty. *Pode o Subalterno Falar?* Belo Horizonte: UFMG, 2010.



Sem-rostro, sem-terra, com-voz: Historicidade do movimento de mulheres do MST e do EZLN.

Vitória Gonzalez Rodriguez¹

Resumo

O trabalho visa traçar um pouco da historicidade do movimento de mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no Brasil, e do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), no México, importantes movimentos sociais latino-americanos, com impacto nacional e projeção internacional, que enfrentam uma situação de produção da terra ambientalmente inviável e socialmente excludente. Entende-se que as relações de gênero no MST e no EZLN, sobretudo em termos comparativos, constituem objeto de estudo que carece de análises sistemáticas. Assim, a partir de revisão bibliográfica e análise de documentos, o estudo analisa, em perspectiva comparada, o movimento de mulheres do MST e do EZLN ao longo do tempo, traçando suas historicidades e pontuando-se similaridades e diferenças. Tem-se como objetivos compreender o surgimento do movimento de mulheres, analisar o seu desenvolvimento, destacando-se as mudanças pelas quais passou, a nível de atuação e de agenda, com o avanço de temas como a agroecologia, por exemplo (impensável sem a imbricação entre gênero e o meio rural), e entender como se dá a incorporação de pautas de gênero pelo MST e pelo EZLN. O estudo pode, ainda, permitir a inferência de tendências sobre a mobilização de questões de gênero em outros movimentos do continente. Por fim, levanta-se considerações sobre a imprescindibilidade de pensar em questões de gênero para aprofundar os processos de democratização pelos quais MST e EZLN passam – internamente, com criação de democratização, ensejam novas formas de pensar e fazer política; externamente, com reivindicação por democratização, pautam lutas por mudanças sociais, políticas e econômicas.

Palavras chave

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN); Movimento de mulheres; Questões de gênero; Meio rural.

Introdução

Este texto é um ensaio inicial da pesquisa que pretendo desenvolver para a dissertação de mestrado. Assim, faço a ressalva de ser uma pesquisa ainda bastante incipiente.



Tenho por objetivo principal abordar a historicidade do movimento das mulheres zapatistas, sem-rostro – do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), México – e mulheres sem-terra – do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Brasil. Ciente de que este objetivo é amplo, não pretendo esgotar análises nem leituras, mas levantar aspectos importantes, reflexões e tendências possíveis.

EZLN e MST são movimentos que enfrentam uma situação de terra ambientalmente inviável e socialmente excludente, em países cujas situações socioeconômicas e políticas em alguma medida se aproximam. Suas lutas pela terra afrontam a expansão da lógica do mercado, e contestam tanto situações localizadas de exclusão e desigualdade quanto um cenário mais geral da ordem mundial sob égide da globalização capitalista financeira neoliberal. Suas lutas e experiências de autonomia se aproximam em determinados pontos e se afastam em outros (Vergara-Camus, 2011).

Em ambas as experiências, a luta pelo controle da terra para a subsistência familiar desemboca em um controle territorial organizado ao redor de estruturas de poder popular autônomo. No entanto, este controle difere substancialmente porque, no caso dos zapatistas, o território tem uma certa continuidade geográfica, enquanto que, no caso do MST, o movimento controla vários territórios, quer dizer, centenas e milhares de acampamentos e assentamentos, que se encontram dispersos por quase todos os estados do país. Contudo, ambos os movimentos logram que suas bases se identifiquem com as instâncias de tomada de decisão (Vergara-Camus, 2011, p. 408).

Um objetivo comum a ambos os movimentos estudados é a autossubsistência. Embora divirjam quanto a formas de relação com o Estado e com partidos políticos, e atuem em cenários em que o capitalismo no campo se dá de maneiras um pouco diferentes, se aproximam à medida que tem experiências concretas de autonomia que impulsionam a luta pela terra, o controle sobre o território e o auto-governo (Vergara-Camus, 2011)².

É extensa a bibliografia que analisa EZLN e MST comparativamente. Talvez uma das mais sistemáticas seja a obra de Leandro Vergara-Camus. Em artigo publicado na *Revista Mexicana de Sociología*, o autor, ao abordar tipos de matrizes organizacionais (social, social-política, política), fala que

À primeira vista, o EZLN corresponde claramente à matriz social e o MST à matriz social-política. No entanto, como veremos, se isso é correto quando nos enfocamos simplesmente em sua forma de se relacionar com os partidos políticos e o Estado, o controle territorial e a formação de estruturas políticas autônomas fazem com que estes



movimentos sejam semelhantes porque, em ambos os casos, constroem formas de poder popular que busca substituir o poder do Estado (Vergara-Camus, 2011, p. 404).

A pesquisa justifica-se porque as análises comparativas entre o MST e o EZLN, embora numerosas, carecem de um recorte de gênero. Entendo que traçar semelhanças e diferenças entre a trajetória dos movimentos de mulheres sem-terra e sem-rosto pode levar a análises interessantes. Ainda, compreendo que essa historicidade e comparação é relevante não só para registrar a história e a memória dos movimentos específicos em si, mas para forjar possibilidades futuras e compreender dinâmicas mais amplas da relação entre movimentos sociais e gênero na América Latina. Assim, busco aliar uma visão mais *macro*, de tendências e de interconexões com ciclos de protesto e ciclos políticos mais amplos do continente, por exemplo, com uma visão mais *micro*, do que acontece dentro desses movimentos.

Pensando em território e territorialidades, a conexão entre diferentes níveis de análise, macro e micro, se relaciona a diferentes escalas, do local ao global, que não podem ser vistas separadamente. Embora o que ocorre a nível de MST e de cada acampamento ou assentamento, por exemplo, esteja inscrito em uma localidade territorial, bem como o que ocorre a nível de EZLN e de cada *caracol*, há também interconexões e relações possíveis que extrapolam as localidades. A comunicação que EZLN e MST logram estabelecer para fora de seus próprios movimentos a fim de dar-lhes visibilidade é elemento que não pode ser desconsiderado da análise. Entendo que um olhar puramente local, assim como um olhar global homogeneizante são míopes frente a realidades complexas que não se circunscrevem a uma única escala – estas se interconectam, potencializam e revitalizam (Flórez, 2009; Bringel; Echart, 2008). Aliar essas escalas na análise é tarefa difícil, porém importante, seja para dar concretude a análises mais amplas, seja para dar um sentido mais geral a questões localizadas.

Ainda com relação à imbricação entre o local e o global, Mirian Simonetti (2007, p. 124) escreve que “é do lugar e das micro-políticas gestadas pelos sujeitos nos diversos modos de viver, sentir, pensar, falar e projetar o futuro, que crescem as demandas e constroem-se novas relações e práticas que se opõem ao processo de globalização capitalista”. Isso guarda relação também com as relações de gênero dentro desses movimentos. Ademais, deixa explícito que o lugar é também político e politizado, não sendo estático, mas influenciado por diferentes sentidos e conexões que o conformam como gênero, raça e classe (Bringel; Echart, 2008), o que se relaciona diretamente com



os movimentos em questão, com espacialidades e territorialidades que se forjam nas relações e produções sociais e de poder.

Meu interesse por esta pesquisa alia fatores acadêmicos e sociais, bem como militantes e políticos – essa é uma ponderação que não pode ser deixada de lado. Pretendo, a partir desse esforço inicial, avançar na pesquisa sem deixar de lado pontes possíveis entre academia e movimentos. Nesse sentido, o texto de Breno Bringel e Renata Varela (2016) lança luz sobre o tema da pesquisa militante na América Latina, recuperando um pouco de sua história e abrindo espaço para discussões e reflexões acerca do anseio de contribuir para transformar uma realidade social desigual. Isso se dá a partir da construção de um olhar e conhecimento socialmente engajados e politicamente posicionados, em que o referencial teórico das pesquisas e as ações transformadoras dos movimentos se retroalimentam. Nesse contexto, há um deslocamento do sujeito-objeto, bem como a afirmação de que o fazer científico e o fazer político são indissociáveis. Dicotomias como sujeito/objeto, teoria/prática, saber/fazer, objetivo/subjetivo perdem relevância, pois não há espaço para supostos fazeres e saberes científicos que sejam objetivos e neutros. A pesquisa mais ampla que pretendo desenvolver relaciona-se com essa temática, à medida que tentarei me afastar da ideia de compreender *sobre* – que envolve não só distanciamento, mas hierarquia entre pesquisadora e movimentos.

Por meio de leitura de bibliografia e de alguns documentos disponíveis nos sites dos movimentos, desenvolvi este texto, que está dividido em três seções de desenvolvimento, para além de introdução e reflexões finais. Na primeira seção, trato de reflexões iniciais sobre o rural; na segunda, sobre o EZLN e na terceira sobre o MST, levantando aspectos sobre seus movimentos de mulheres.

Algumas considerações iniciais sobre o rural: Desigualdades e gênero

De início, não se pode deixar de mencionar que a ordem capitalista envolve desigual distribuição de recursos, poder, liberdade não só entre pessoas, mas entre territórios e Estados. Assim, a relação entre capitalismo e colonialismo não pode ser negligenciada, nem mesmo a acentuação de desigualdades a partir do neoliberalismo. As desigualdades de raça, gênero e classe não são naturais, senão construídas historicamente (Quijano, 2000; hooks, 2019; Marcos, 2017). Nesse contexto, a terra e a estrutura agrária cobram centralidade, bem como movimentos sociais que buscam combater algumas dessas assimetrias – de que são exemplo MST e o EZLN.



Assimetrias essas que podem ser vistas e combatidas de modo conjunto – o que é um desafio, mas também uma necessidade.

São também assimétricas as relações entre homens e mulheres, como diferentes estudos tão conta. Ainda, o são as relações entre mulheres brancas e não brancas, e de diferentes classes e regiões (hooks, 2019). Nesse cenário, ao abordar mulheres da periferia da periferia (Ciriza, 2006), percebe-se que suas lutas são muitas vezes duplamente invisibilizadas. No entanto, um olhar atento ao campo aponta para a importância de não colocar mulheres rurais em um local de subordinação completa, bem como de não vê-las como um todo homogêneo. Afinal, o rural e as relações de gênero que o compõem não são homogêneos, nem mesmo lineares. Nesse sentido, há de se ter cuidado com um olhar acadêmico e teórico que vai não só do norte ao sul, do centro à periferia, da academia para o campo de pesquisa, mas do urbano ao rural – olhar esse que muitas vezes tende a chapar a diversidade social, econômica e política do rural e das mulheres rurais. Essa é uma consideração que pretendo aprofundar ao longo da feitura da dissertação.

Em texto sobre os nexos entre desenvolvimento e pobreza e o papel dos movimentos sociais latino-americanos, Juliana Flórez (2009), consoante com Arturo Escobar e Sonia Álvarez (1992), defende que, nos anos 1980, a proliferação de movimentos na América Latina relaciona-se justamente com a impossibilidade de o desenvolvimento resolver problemas que ele mesmo engendrou (relação entre crise da dívida, *década perdida* e ação coletiva). Assim, entende que o desenvolvimento é “um frutífero campo de luta dos movimentos” (Flórez, 2009, p. 9). Desse modo, estes movimentos não só denunciam a crise do desenvolvimentismo no continente e os limites da modernidade e da colonialidade, mas levantam alternativas possíveis³. Claro está que essa proliferação de movimentos também se relaciona com o movimento antiglobalização (final da década de 1990) e com o fim de períodos de ditadura militar (como ponto para o caso do MST no Brasil).

As políticas em nome do desenvolvimento estão relacionadas não só à modernidade, mas à colonialidade. A colonialidade tem em si um corte profundamente excludente – que, para além da exclusão, implicou muitas vezes em apagamento histórico e eliminação tanto física quanto simbólica de determinados grupos. Aníbal Quijano (2000) argumenta que isso se dá em diferentes âmbitos sociais – de trabalho, sexo, autoridade e intersubjetividade, controlados respectivamente pela empresa capitalista, a família burguesa, o Estado e o eurocentrismo.



Com relação à concentração de terras no Brasil e no México, Giarraca *et al.* (2009) e Teubal (2009) fazem um apanhado histórico desde a época das colônias. Mesmo após a independência e com sucessivos diferentes governos, a concentração de terras permaneceu sendo uma importante questão social e política – e mesmo tentativas de reformas agrárias, quando não barradas, não lograram seus objetivos, de modo que as estruturas agrárias seguiram sendo pautadas pela concentração.

A partir de transformações sociais, políticas e econômicas engendradas no bojo da globalização neoliberal e suas políticas, os estudos agrários na América Latina foram perpassados por uma série de modificações de atores, práticas e gramáticas⁴. Isso leva a estudos que podem ser englobados no termo *nova ruralidade*, que, não sem controvérsias acerca de sua existência, de alguma maneira amplia os horizontes de pesquisas acerca do campo, do rural, do agrário. Relações dos movimentos sociais rurais e dos trabalhadores rurais com o Estado, com latifundiários, com paramilitares, com organizações não governamentais e do terceiro setor, com organizações estrangeiras, com empresas multinacionais, enfim, compõe um mosaico de diferentes atores nos territórios. Há uma miríade de atores e conexões que se estabelecem, além de novas relações sociais e econômicas (Kay, 2007).

No nível laboral, vê-se a feminização do trabalho assalariado rural, bem como a precarização e flexibilização do trabalho rural de modo geral. Ainda, práticas já existentes anteriormente se aprofundam a partir do neoliberalismo e do advento da financeirização, como o despojo, a insegurança e a violência. A insegurança alimentar também compõe o quadro. Novas relações entre o rural o urbano também aparecem nos estudos da *nova ruralidade*, junto a diversos outros temas, como impactos da globalização e dos tratados de livre comércio, desenvolvimento local e problemas ecológicos. Políticas neoliberais de privatização e liberalização de mercados empobreceram diferentes populações e, para além do *material*, afetaram ainda mais o *simbólico* e o *identitário*. A partir de meados dos anos 80, a emergência do movimento indígena e o ressurgimento de movimentos sociais no campo recobram importância e vigor nos estudos rurais – e, aqui, o Exército Zapatista de Liberação Nacional (EZLN) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) são expoentes importantes (Kay, 2007).

O sistema capitalista altera relações sociais e econômicas no campo antes mesmo do neoliberalismo e da globalização neoliberal – que não é senão uma expansão do capitalismo –, com a subordinação da terra ao capital (Vergara-Camus, 2011). A



reestruturação neoliberal do campo e o fortalecimento da propriedade privada aprofunda desigualdades e engendra novos problemas, afetando as relações que nele se estabelecem, nas famílias, entre as famílias, com a terra, com a produção, enfim. Essas alterações, vale pontuar, não se dão da mesma maneira no México (especificamente no estado de Chiapas) e o no Brasil, e as bases sociais do EZLN e do MST também são diferentes, sendo estas mais heterogêneas que aquelas. Apesar de diferenças, similitudes não faltam, como apontado.

EZLN: contextualização e apontamentos sobre movimento de mulheres

O levantamento zapatista não pode ser dissociado da implementação de políticas neoliberais – não por acaso se dá no dia 1 de janeiro de 1994, dia em que o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, do inglês) entraria em vigor, depois de anos de preparação na Selva Lacandona. Entre as demandas zapatistas, estão demandas camponesas, étnicas – de reconhecimento indígena e, de maneira mais abrangente, demandas relacionadas à democracia e à sociedade mexicanas. Assim, para além da questão da terra e de justiça, eixo importante da luta zapatista é a abordagem étnica e anticolonial (Vergara-Camus, 2011). Depois do levantamento e de dias de confronto direto, houve um cessar-fogo e uma tentativa de processo de negociação sobre acesso à terra, reformas políticas, direitos indígenas, demandas sociais. O processo envolveu idas e vindas e em 1996 se assinaram os Acordos de San Andrés sobre Direitos e Cultura Indígena, que finalmente foram descumpridos pelo governo em 2001 (González, 2012; Giarraca *et al.*, 2009).

No começo dos anos 1990, no bojo de reformas neoliberais e do estabelecimento das bases para o ingresso no NAFTA, houve a alteração do artigo 27 da Constituição, responsável por regular o sistema de tenência da terra. Essa foi uma das demandas principais do EZLN em seu levantamento. Com a reforma deste artigo, a terra deixou de precisar ter função social, o que privilegiou a propriedade privada e a comercialização. Isso permitiu, por exemplo, que se vendesse o lote *ejidal* ou que se o utilizasse como garantia de empréstimo, de modo que forçou a saída de camponeses e indígenas de seus territórios. A alteração, enfim, mudava as possibilidades de propriedade coletiva da terra, os *ejidos*. Destaca-se que essas alterações não tratam de um ‘latifundismo’ tradicional: grande parte dos latifúndios não pertence mais a grandes *terratenientes*, produtores agrícolas ou ganadeiros, mas a empresas transnacionais – e a isso está relacionado um novo tipo de conflito e novos atores (Giarraca *et al.*, 2009; Simonetti, 2007)⁵.



Sua luta no território está relacionada a uma organização política e territorial específica, que envolve os *caracoles* – cujo nome se relaciona com a lógica *lento, pero avanzamos* –, as *Juntas de Buen Gobierno* e os municípios autônomos. Cooperativas de mulheres também são formadas nesses espaços. A autonomia de fato e a organização dessa estrutura se deu a partir de 2003 (González, 2012). Especificamente no caracol Oventic, a *Cooperativa Mujeres por la Dignidad* tem seu início em 1997 e é importante para a coordenação e organização do trabalho de mulheres artesãs. Interlocutoras e interlocutores de Giarraca *et al.* (2009) apontam como nem sempre a saída das mulheres do âmbito de casa para as atividades da cooperativa se dá de maneira tranquila, o que dialoga com bibliografia de gênero e ruralidades de modo geral.

Os municípios autônomos são um espaço de participação efetiva que mudaram a lógica da política local e construíram um sujeito de transformação identificado com as estruturas de poder e o projeto político do EZLN. Os municípios autônomos e as juntas de bom governo zapatistas – ao cumprir funções atribuídas às instituições estatais estabelecidas (educação, saúde, registro civil, justiça, resolução de conflitos)

– tornaram-se verdadeiros governos paralelos que competem com os governos institucionais pela aceitação e o reconhecimento da população de filiação zapatista e não-zapatista (Vergara-Camus, 2011, p. 405).

Ainda antes do levantamento, em 1993, houve a Lei Revolucionária de Mulheres, com o reconhecimento de diferentes direitos – escolha do parceiro, determinação do número de filhos, igualdade de condições, participação na luta zapatista, trabalho e salário, educação, saúde, entre outros. No entanto, sua promulgação não envolveu necessariamente seu cumprimento e, ao longo do tempo, a prática e a organização das mulheres não só tentou fazer com que se cumprisse dita lei, como avançou em outras frentes e debates (Rovira; Gonzalez, 2012).

Em 2001, depois da *Marcha del color de la tierra*, que saiu de Chiapas rumo à capital mexicana, a Comandanta Esther falou na tribuna do Congresso, o que foi um momento emblemático política e simbolicamente, em que literalmente uma mulher *sem-rosto* era uma mulher *com-voz* – *ahora es nuestra hora* foi uma frase emblemática de seu discurso, conforme apontado por Guiomar Rovira. Era a hora das mulheres indígenas zapatistas. Em seu discurso, percebe-se o enfrentamento a uma situação excludente e desigual, não só com relação à terra e à invisibilização, mas em outros serviços materiais básicos – saúde, educação, saneamento básico. O corpo da mulher já aparecia aliado à dor, com falta de atendimentos de saúde básicos, por exemplo, bem



como à violência – seja da militarização, seja da família. Ainda, percebe-se também uma dimensão de enfrentamento dentro do próprio movimento, com seus pares homens, com alusão à violência, simbólica e física, em que novamente a dimensão do corpo é central.

Esther aponta para três dimensões de opressão: etnicidade, gênero e classe, como indígena, mulher e pobre. Ressalta que a opressão não se dá apenas de fora para dentro do movimento, mas dentro do movimento em si, em que houve diferentes tensões e disputas acerca de sua participação e de suas reivindicações. Aqui pode-se pensar como o movimento de mulheres corrobora com a questão da democratização do movimento, para fora e para dentro do mesmo.

Rovira destaca a influência e imprescindibilidade das mulheres na resistência e na vida comunitária zapatista e pontua como foram aumentando sua força, organização, participação e envolvimento com os anos, no discurso e na prática. A participação das mulheres se dá em diferentes níveis: nas bases de apoio, entre as insurgentes (estrutura armada), e no Comité Clandestino Revolucionário Indígena (estrutura política), em que está a Comandância. Na Comandância, em que há mulheres desde o início, quatro delas estavam na mencionada Marcha de 2001 – Esther, Yolanda, Susana e Ramona. A questão de serem sem-rostos e de representarem um coletivo de mulheres, embora com um nome próprio, merece atenção. Embora desde o princípio contasse com mulheres nas filas do exército e na Comandância, também chama atenção como eram apenas 4, ao passo que os comandantes homens eram mais – o que mostra contradições.

No dia a dia, a necessidade de deixar o álcool para ser zapatista aparece como um ponto importante, pois o alcoolismo diminuiu e, com isso, a violência doméstica. A dimensão da formação e da escolaridade, com o aprendizado também do espanhol, é importante para as mulheres, para seu contato externo, e em que há um sentido de pertencimento não mais ao marido, mas ao movimento. Ainda no âmbito do dia a dia, Rovira aponta para a questão do enfrentamento ao exército e a grupos paramilitares, com conhecida repressão a grupos indígenas, e ainda mais às mulheres, com violações sexuais e utilização do corpo e do estupro como arma de guerra.

Com relação ao feminismo, percebe-se nas falas, discursos e mesmo na prática de mulheres zapatista, que não há uma consonância com feminismos externos, de modo que sua luta é construída entre elas, para elas, e entre a comunidade, em um diálogo constante, em que o avanço nem sempre é linear. Não se tratam, enfim, de mulheres apenas, mas de mulheres indígenas e, ainda, zapatistas, com passados e presentes



diferentes aos de outras mulheres (embora não homogêneos entre si) que buscam forjar outros futuros. Apesar dessas diferenças, nos últimos anos vêm potencializando diálogos com *mulheres do mundo*. Nesse sentido, no começo de 2018 houve o Primeiro Encontro Internacional, Político, Artístico, Desportivo e Cultural de Mulheres que Lutam, retomando um sentido de luta ampla contra o capitalismo e o machismo. O Segundo ocorrerá no final do presente ano e tem como tema a violência contra as mulheres, com dois objetivos – denúncia a articulação para enfrentamento.

Em 2017, a partir de uma estratégia conjunta entre EZLN e Congresso Nacional Indígena (CNI), tentou-se a postulação de um Conselho Indígena de Governo para a presidência mexicana, cuja *vocera* (porta-voz) seria uma mulher indígena – a escolhida, na Assembleia Constituinte do CIG, em que estive presente e cujo relato pretendo aprofundar em outra oportunidade, foi Maria de Jesus Patrício, Marichuy. Embora com diferentes críticas, relacionadas à disputa pela institucionalidade, que ao final não se concretizou pois não se conseguiu o número de assinaturas necessárias, EZLN e CNI parecem ter cumprido um de seus principais objetivos: a visibilização da questão indígena no México para além de seus territórios e a propagação das resistências (Gomes; Benzaquen, 2018). O fato de ser uma *vocera* mulher certamente se relaciona com o acúmulo de lutas zapatistas e indígenas⁶.

MST: Contextualização e apontamentos sobre movimento de mulheres

O surgimento do MST enquanto movimento se dá em 1984, em seu primeiro Encontro Nacional, no entanto, o movimento foi se gestando em anos anteriores. Comelli *et al.* (2006) apontam para quatro fatores que influenciaram nesse processo de criação do movimento: a situação social e econômica do campo brasileiro a partir do advento da modernização implantada na década de 1970, que levou ao êxodo rural de muitos camponeses e à pauperização de maneira generalizada; o papel desempenhado pela Igreja e pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e Comissão Pastoral da Terra; certa deslegitimação da ditadura militar, com aumento da conflitividade social rumo à democratização e, nesse sentido, a ascensão de movimentos sociais e sindicais revigorados; certa crise de formas tradicionais de representação e movimento no mundo rural e do trabalho. O MST e seus princípios envolvem, assim, certa ruptura e novidade com relação à organização, à política e à ação coletiva de movimentos que o antecederam.

Seu surgimento deu-se, então, um contexto de transição política da ditadura militar, em que diversos movimentos surgiram na cena nacional depois de anos de dura repressão.



Sua composição é, desde seu início, bastante diversa e heterogênea e, à diferença do EZLN, está pulverizado pelo país e não concentrado em uma região, como dito. É herdeiro de diferentes lutas, como as da Ligas Camponesas, e se espalhou por todas as regiões do país, de dimensões continentais. É necessário considerar a extensão do MST, não só em termos geográficos, mas também em termos numéricos. Para além de estar em diferentes regiões e ser composto por muitas pessoas, o MST engloba uma grande diversidade, e isso implica em diferentes interesses, necessidades e mesmo estratégias – o que aponta para sua heterogeneidade e, daí, para alguma dificuldade em abordá-lo como um todo.

Em seu seio está a luta pela terra e por reforma agrária, cuja mobilização se dá por meio da tríade *ocupações* de terra, *acampamentos* e *assentamentos*, bem como a luta por mudanças estruturais na sociedade brasileira, que deveria ser mais justa. Aqui, cabe ressaltar a importância da mobilização política para além da conquista da terra, dentro dos assentamentos – com a organização da produção, a vida coletiva, a luta por uma reforma agrária sistemática e, por vezes, cooperativas. Se coloca contra um modelo produtivo pautado na monocultura e na exportação, que deixa cada vez menos terras disponíveis para a reforma agrária. Nesse sentido, em termos em alguma medida semelhantes aos apontados no caso mexicano, embora com suas particularidades, está o enfrentamento e a denúncia ao avanço do capital no campo, que envolve outro tipo de latifúndios e novos conflitos e violências, sendo uma das estratégias a criminalização dos movimentos (Teubal, 2009; Comelli *et al.*, 2006).

Em sua atuação, vê-se momentos de maior visibilidade e de maior latência, ambos contribuindo para a construção do território, das coletividades, de novas formas de sociabilidade, produção e comercialização, enfim:

*O momento de visibilidade é quando os movimentos irrompem na cena pública por meio de ações coletivas, cristalizadas no caos do MST pelas ocupações de terra, os acampamentos e as mobilizações. Em troca, os momentos de latência são aqueles em que o movimento se recua “para dentro”, reforçando seus laços solidários e organizativos ao mesmo tempo em que se (re)criam novas práticas sociais, políticas, culturais e/ou econômicas. É neste momento de latência do MST que se marcam as experiências dos assentamentos, das escolas auto-gestionadas, as oficinas de formação e as cooperativa de produção e comercialização. Estes dois momentos se potencializam mutuamente. (Comelli *et al.*, 2006, p. 58).*



Seja na frente de luta das ocupações, dos acampamentos, em que ainda não se conquistou a terra, seja na frente de luta dos assentamentos, em que já se conquistou a terra, mas segue sendo necessária mobilização política no âmbito do movimento, as realidades, as lutas, as lidas diárias, enfim, afetam as mulheres de maneira diferente e sua organização é importante. Sobre esses diferentes espaços de participação no movimento e o envolvimento das mulheres, Renata Gonçalves escreve:

1) a ocupação, quando com frequência estão na linha de frente nos confrontos armados com o aparato repressivo “clandestino” e/ou estatal; 2) o acampamento, onde, apesar das constantes e violentas investidas dos jagunços das fazendas, há uma maior participação política das mulheres e quando se vive o mais próximo de uma igualdade entre os sexos; e 3) o assentamento, quando percebemos um recuo das mulheres para a chamada esfera doméstica. (Gonçalves, 2009, p. 119).

Em seu texto, Maria Ignez Paulilo (2009), a partir também do trabalho de outras pesquisadoras, traz reflexões importantes sobre hierarquias quando aborda movimento de mulheres e MST: se é verdade que mulheres assentadas enfrentam antigas hierarquias, também o é que enfrentam novas hierarquias ao participar de reuniões, estruturas comunitárias, etc. No entanto, embora se enfrente essa novas hierarquias, há espaço para redefinições nesse movimento de sair do âmbito da *domesticidade da família*. O eixo trabalho da luta de mulheres trabalhadoras rurais, por seu reconhecimento, não é, contudo, homogêneo – e não se mostra condição suficiente para mudanças na vida e na consciência das mulheres, debate que merece ser aprofundado em outra oportunidade.

Em pesquisa sobre mulheres do MST no Mato Grosso do Sul, Marisa Farias (2011) buscou entender conflitos de gênero nos acampamentos e assentamentos analisados, compreender de que modo os princípios de orientação do MST relativos a gênero são incorporados ou negligenciados nesses espaços, e analisar a presença de mulheres no movimento como um todo. Nos documentos e jornais que analisou, a autora apontou como a questão de gênero, mesmo entre as mulheres, não era um ponto primordial ou central, embora fosse pautada. Formalmente, a luta das mulheres aparece em documentos diversos do MST, e o *patriarcado* aparece como parte constituinte do *capitalismo*, ambos envolvendo explorações que devem terminar (Farias, 2011).

Apesar da existência de documentos relacionados a gênero, em seu trabalho de campo mulheres denunciavam formas simbólicas de violência e desvalorização de seus trabalhos e participação no movimento – a autora ressaltou o envolvimento de mulheres



no processo de luta tanto *pela* terra, nos acampamentos, quando *na* terra, nos assentamentos, bem como na conexão entre esses espaços-tempos, transitórios ou permanentes. Esse envolvimento e participação, contudo, não impediram assimetrias não só no que diz respeito à valorização, mas também à posse dos lotes, à dominação econômica – o que foi sendo enfrentado com articulação, resistência e organização de mulheres que questionam a falta de espaço decisório, por exemplo (Farias, 2011).

Em pesquisa acerca da construção do Setor de Gênero do MST – “ pilar das diferentes formas de organização das mulheres no interior do MST [...] produto das e o ponto de partida para as reflexões acerca da politização e ação das mulheres no Movimento (Gonçalves, 2009, p. 1999)” –, Renata Gonçalves (2009) constata que há tensões com relação à participação política das mulheres no movimento e em suas instâncias de poder. Ainda, aponta para um caminho em que a ênfase no termo *mulheres* é substituída pela ênfase no termo *gênero*, movimento que a autora entende como uma (re)politização deste último conceito, com o horizonte de se construir, teórica e praticamente, novas políticas e relações de gênero dentro do movimento. A criação do Setor Nacional de Gênero foi precedida pela criação do Coletivo Nacional de Mulheres e o Coletivo Nacional de Gênero. No início do movimento, à questão das mulheres e de gênero era dada pouca ou nenhuma ênfase. Já na década de 1980, foi formada uma Comissão Nacional de Mulheres, para que houvesse grupos e organizações de mulheres. Articulação de mulheres e atuação contra discriminação e machismo eram, à época, temas centrais. A participação de mulheres em postos de liderança era para aquele então baixa. Foi ao longo dos anos 1990 que a articulação de mulheres paulatinamente cresceu.

Nos assentamentos é ainda mais visível a hierarquia entre os gêneros, em que o trabalho da mulher é desvalorizado e tido como improdutivo e dependente (Gonçalves, 2006; Deere, 2004) – em uma lógica que vem sendo discutida nos estudos que aliam gênero ao rural. A hierarquia é ainda maior quando se fala em juventude e recai fortemente sobre as jovens mulheres (Castro, 2005). Carmen Deere (2004) aponta sobre um problema sério com relação ao INCRA, em situações em que a administração e a posse da gleba/lote eram dadas sempre aos homens, tidos como chefes de família e, em caso de mulheres solteiras, separadas ou viúvas, a posse cabia ao filho, desde que maior.

Em 1995, houve um Primeiro Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais, cuja influência se sentiu no MST, com pautas relacionadas a direitos como salário-



maternidade, acidente de trabalho. Em 1996, surge a primeira cartilha organizada pelo Coletivo Nacional de Mulheres do Movimento, *A Questão da Mulher no MST*, em que se pautava a necessidade de uma estrutura para sua representação e participação, bem como a distância entre teoria e prática, com necessidade de uma formação atenta ao tema. Aos poucos, e junto ao Setor de Formação, surgem novas cartilhas, em que se percebe o uso do termo questão de gênero, mais abrangente, como em cartilha lançada em 1998, *Compreender e construir novas relações de gênero*. Em 2000, já sob auspício do Coletivo Nacional de Gênero, é lançada a cartilha *Mulher Sem Terra*. Em 2003, tem-se a primeira cartilha elaborada pelo Setor Nacional de Gênero, com caráter mais teórico, cujo título é *Construindo novas relações de gênero: desafiando relações de poder* (Gonçalves, 2006; MST, s.d).

Uma constante no debate era não só a inclusão de mulheres na estrutura organizativa e em postos de liderança (questão numérica), mas a qualidade dessa participação. Esses debates e mesmo as nomenclaturas envolvidas não se deram sem tensões, nem de forma linear. A reconstrução dessa trajetória de organização mostra que ela não foi linear, no entanto, passou-se do termo *mulher* ao de *gênero* e de espaços exclusivos de mulheres a debate envolvendo homens, considerando que isso aprofundaria o debate (Gonçalves, 2006; MST, s.d). Gonçalves (2009) aborda com as discussões de estudos de gênero estiveram em alguma medida encerradas na academia e apartadas da militância e daí entende que o MST repolitiza o conceito.

Se em um primeiro momento a luta esteve relacionada ao reconhecimento da mulher enquanto trabalhadora rural, depois pautas foram sendo acrescentadas na luta, sendo uma das principais a questão da agroecologia e mesmo da agroflorestal. Nesse sentido, a luta por uma outra alimentação possível, a imbricação entre rural e urbano e a questão dos agrotóxicos cobram centralidade e nesse cenário as mulheres sem-terra desempenham papel importante (MST, s.d).

Por fim, cabe ressaltar aspecto apontado no início: a importância das Comunidades Eclesiais de Base para a mobilização política das mulheres rurais, antes mesmo de sua prática sindical, e a imbricação de sua mobilização com a transição política (Aguilar, 2015; Deere, 2004). Ainda, é importante ter em mente que a mobilização de mulheres rurais não se dá exclusivamente pelo MST; diferentes trabalhos, como os de Aguiar (2015) e Deere (2004) dão conta da diversidade. Para que pudessem circular em espaços políticos e públicos, mulheres trabalhadoras rurais enfrentaram uma série de barreiras e hierarquias, relacionadas ao controle familiar e social, e mesmo quando



logram adentrar espaços políticos (e o fazem por meio de diferentes estratégias), seguem enfrentando diferentes hierarquias – de modo que entrar é apenas um primeiro (embora importante) passo. Ainda, a bibliografia aponta como as diferentes estratégias conformam diferentes movimentos (no duplo sentido de movimentos sociais e de dinâmicas) e diferentes possibilidades de atuação.

Reflexões finais

A questão da terra e do combate a uma estrutura fundiária concentrada não está separada, antes pelo contrário, de uma luta por outro tipo de modelo produtivo e de sociedade, ainda mais com o aprofundamento do neoliberalismo e da financeirização econômica, que tem veias profundas nos campos latino-americanos, em especial mexicanos e brasileiros. Ainda, questões indígena e de classe também cobram sua importância, bem como a questão ambiental e alimentar. Em todo esse cenário, o movimento de mulheres de ambos os movimentos (MST e EZLN) apontam algumas tendências, como é a de que gênero passe a ser algo transversal nos movimentos (embora isso seja uma dificuldade na prática) e não apenas um assunto específico, delegado e um grupo específico.

Como aponta Alejandra Ciriza (2007), é importante ter em mente a diferenciação entre, por um lado, a condição cidadã dada a um sujeito abstrato e, por outro, e os corpos reais de sujeitos da sociedade. Com isso, a autora aborda a tensão entre um sujeito abstrato, que é masculino e branco, e corpos reais de mulheres, por exemplo, e as tensões jurídicas que advêm da tensão entre abstração de uma ordem legal, jurídica e social *versus* corporeidade. Embora a autora aborde com maior ênfase o direito no que diz respeito ao aborto, para este trabalho importa suas considerações sobre os corpos na política e a invisibilização de sujeitos concretos frente a cidadãos abstratos – não só em uma divisão social e sexual do trabalho, mas também, por exemplo, em suas história e memória coletiva. Isso se relaciona com o trabalho à medida que mulheres sem-rostro e sem-terra são corpos reais que são atravessados por diferentes desigualdades e exclusões e que não se comparam a sujeitos jurídicos abstratos.

A questão e relação com a terra vai além de aspectos econômicos, e mesmo além de aspectos sociais e políticos. Abrange aspectos ambientais, ecológicos, culturais, étnicos, de gênero e de identidade. Se bem EZLN e MST são movimentos que podemos chamar de sócio territoriais (Comelli *et al.*, 2006), que atuam em territórios em disputas (com latifundistas, com o Estado, com o agronegócio, com empresas), é necessário também pautar novas territorialidades em jogo, bem como as diferentes relações de



seus membros com o território – enfatizando aqui a relação das mulheres com o território e a dimensão territorial que também pode estar em seus próprios corpos (debate que deve ser aprofundado, mas que as mulheres sem-terra e sem-rosto já pautam).

Não se pode deixar de considerar uma discussão que é central nos estudos que relacionam espaço rural e gênero: as dicotomias entre casa/espaço privado e terra/espaço público não se aplicam invariavelmente. As mulheres transitam entre ambos os espaços, que na prática costumam se relacionar de maneira intrínseca. Ademais, seu trabalho em *casa* também é trabalho que reafirma seus laços e de sua família com a *terra*. E, na luta pela terra, não há dentro e fora. Além disso, a cozinha, tida como espaço privado/doméstico, acaba se constituindo como espaço público e de trânsito. Ainda que haja questões problemáticas relativas ao reconhecimento e à remuneração, também é importante considerar que as sociabilidades engendradas em espaços tidos como exclusivamente como masculinos e femininos são importantes para a vida no campo (Farias, 2011; Nascimento, 2012; Carneiro Cerqueira, 2017).

Este trabalho, como dito, é um esforço inicial e, por isso, inevitavelmente parcial, de se pensar a historicidade do movimento de mulheres no MST e no EZLN. Mais do que conclusões, levanta reflexões. Nesse sentido, como se tentou mostrar, os movimentos de mulheres apresentam algumas semelhanças e diferenças. Entre as semelhanças, estão: a luta pela terra e por transformações nas relações de gênero; a reivindicação por poder trabalhar na terra e por reconhecimento do trabalho e da participação; a dimensão da casa e dos cuidados; a noção de transbordamento para além das mulheres, dentro e fora do movimento, bem como a transcendência para outras gerações; a transversalidade das pautas de gênero; a incidência nas sociabilidades e espacialidades; a dimensão do corpo. Entre as diferenças, destacam-se: foco na reforma agrária, no MST, e na justiça e dignidade dos e das indígenas no EZLN; a questão da etnicidade/raça; e o enfrentamento à militarização, que se dá de forma diferente no âmbito dos dois movimentos.

Seja em suas mobilizações e ações coletivas públicas, momentos de visibilidade, seja em suas mobilizações e práticas internos, momentos de latência, o movimento de mulheres do EZLN e do MST avançaram ao longo do tempo, em discurso e prática, incorporando novas temáticas e pautando diferentes opressões, sentimentos, dores, anseios, sonhos. Desse modo, entendo que corroboram para um movimento de dupla democratização, para dentro e para fora dos movimentos, incidindo em suas culturas políticas – não só como proposta, mas como prática (Bringel; Echart, 2008)



A luta pela igualdade de gênero, com os avanços de pautas em que se insere, envolve disputar hierarquias de poder dentro e fora dos movimentos, implicando também um enfrentamento à ordem econômica e social vigente, que constantemente produz e reproduz diferentes desigualdades. Gênero, assim, acaba sendo algo transversal às lutas e transborda o movimento das mulheres. Fica evidente que buscam mudanças dentro e fora do movimento. Cabe, contudo, considerar que há também disputas, não sendo uma construção linear e homogênea entre os movimentos e entre as mulheres, que caminham forjando outros mundos possíveis, em que caibam não só diferentes mundos, mas todas as mulheres.

Notas

¹ Mestranda em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ). Bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Na graduação, realizou intercâmbio acadêmico na *Facultad de Ciencias Políticas y Sociales* (FCPyS) da *Universidad Nacional Autónoma de México* (UNAM). É bolsista da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina (NETSAL), grupo de pesquisa vinculado ao IESP-UERJ.

² Sobre o tema, Leandro Vergara-Camus (2011, p. 409) escreve: “O conceito de autonomia perante o mercado e o Estado não deve, então, ser entendido de forma absoluta, como sinônimo de autarquia ou isolamento [...], senão de maneira relativa e variável de acordo com a conjuntura política e as experiências de cada movimento. “Autonomia” se refere mais a uma busca de margem de manobra e de negociação pelos camponeses com relação ao mercado e ao Estado, tanto a nível familiar como coletivo”.

³ Aqui entraria o debate sobre perspectivas críticas do desenvolvimento, com *alternativas de desenvolvimento* ou *alternativas ao desenvolvimento*. Debate este que, infelizmente, não cabe neste ensaio. No entanto, vale a pena ver considerações de Flórez (2009) sobre o tema, em que a autora argumenta que não são necessariamente excludentes. Pensar a atuação de movimentos sociais a partir desta lógica binária não considera a complexidade de suas realidades e práticas sociais, políticas e mesmo territoriais.

⁴ Categorias utilizadas no âmbito de pesquisa desenvolvida no NETSAL sobre transformações do ativismo no Brasil.

⁵ É importante também ter em mente que a entrada do México no NAFTA, juntamente à pouca proteção que se deu aos diversos tipos de milhos locais, tiveram consequências



para a soberania e autossuficiência alimentar do país, o que foi particularmente grave com a importação de milho transgênicos dos Estados Unidos (Giarraca *et al.*, 2009).

⁶ Para maiores informações acerca da candidatura, para além dos comunicados oficiais, se pode ver texto de Simone Gomes e Guilherme Benzaquen (2018). A autora e o autor destacam o uso de oximoros como *ela- somos* e *mandar obedecendo*.

Referências bibliográficas

Aguiar, Vilenia. (2015). *Somos todas Margaridas: um estudo sobre o processo de constituição das mulheres do campo e da floresta como sujeito político*. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, São Paulo.

Bringel, Breno. Varella, Renata. (2016). A pesquisa militante na América Latina hoje: reflexões sobre as desigualdades e as possibilidades de produção de conhecimentos. *Revista Digital de Direito Administrativo*, 3, 3, 474-489.

Bringel, Breno. Echart, Enara. (2008). Movimentos sociais e democracia: os dois lados das “fronteiras”, *Caderno CRH*, 21, 54, 457-475.

Carneiro Cerqueira, Ana. (2017). “Mulher é trem ruim”: a “cozinha” e o “sistema” em um povoado norte-mineiro, *Estudos Feministas*, 25, 2, 707-731.

Castro, Elisa. (2005). *Liberdade vigiada – mecanismos de controle, autoridade paterna, submissão e transgressão* In: _____. *Entre Ficar e Sair: uma etnografia da construção social da categoria jovem rural*. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro.

Ciriza, Alejandra. (2006). *Genealogías feministas y ciudadanía: Notas sobre la cuestión de las memorias de los feminismos en América Latina*. VIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres, III Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, Universidad Nacional de Córdoba, (Córdoba, Argentina).

Ciriza, Alejandra. (2007). *En qué sentido se dice ciudadanía de mujeres? Sobre las paradojas de la abstracción del cuerpo real y el derecho a decidir*. In Hoyos Vásquez, Guillermo. *Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía* (293-319). Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Comelli, María *et al.* (2006). *Movimiento Sin Tierra: antecedentes y construcción territorial*. In Giarraca, Norma; Montenegro, Jorge; Comelli, María (Coord.). *Cuando el territorio es la vida: la experiencia de los sin tierra en Brasil*. GEMSAL (Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina). Buenos Aires: Antropofagia.



- Deere, Carmen. (2004). Os direitos da mulher à terra e os movimentos sociais rurais na reforma agrária brasileira, *Revista de Estudos Feministas*, 12, 1, 175-204.
- Escobar, Arturo. Álvarez, Sonia. (1992). *The making of social movements in Latin America: identity, strategy and democracy*. USA: Westview Press.
- EZLN. <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/> [Web page].
- Farias, Marisa. (2011). Mulheres no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH*. São Paulo.
- Flórez Flórez, Juliana. (2009). Los movimientos sociales y la crisis del desarrollismo: una aproximación teórica desde Latinoamérica. *Série Documentos Especiales*. Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- Giarraca, Norma *et al.* (2009). México. In Giarraca, Norma; Teubal, Miguel (Coord.). *La tierra es nuestra, tuya y de aquel: la disputa por el territorio en América Latina*. GEMSAL (Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina). Buenos Aires: Antropofagia.
- Gomes, Simone. Guilherme, Benzaquen. (2018). A inflexão zapatista: o Congresso Nacional Indígena e a candidatura presidencial em 2018, *Ciências Sociais Unisinos*, 54, 2, 196-205.
- Gonçalves, Renata. (2009). (Re)politizando o conceito de gênero: a participação política das mulheres no MST, *Mediações – Dossiê: Contribuições do Pensamento Feminista para as Ciências Sociais*, 14, 2, 198-216.
- González, María Luisa. (2012). Igualdad de Género en la Revolución Zapatista de Chiapas: los Derechos de la Mujer Zapatista, *Kóre – Revista de historia y pensamiento de género*, 7, 101-135.
- hooks, bell. (2019). *O feminismo e para todo mundo: políticas arrebatadoras*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.
- Kay, Cristóbal. (2007). Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina, *ÍCONOS*, 29, 31-50.
- Marcos, Sylvia. (2017). *Cruzando fronteras: mujeres indígenas y feminismos abajo y a la izquierda*. Santiago de Chile: Editorial Quimantú.
- MST. <https://mst.org.br/> [Web page].
- Nascimento, Silvana. *Homem com homem, mulher com mulher: paródias sertanejas no interior de Goiás*. *Cadernos Pagu*, 39, p. 367-402, 2012
- Paulilo, Maria Ignez.. (2009). “Movimentos das mulheres agricultoras e os muitos sentidos da 'igualdade de gênero'.” In Fernandes, Bernardo; Medeiros, Leonilde; Paulilo, Maria Ignez. (Orgs.). *Lutas camponesas contemporâneas: condições, dilemas e*



conquistas. A diversidade das formas das lutas no campo. São Paulo: EdUNESP. Brasília: NEAD.

Quijano, Aníbal. (2000). Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. In Lander, Edgardo (Org.). La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.

Rovira, Guiomar. Ahora es nuestra hora, la hora de las mujeres indígenas.

Simonetti, Mirian. (2007). A Geografia dos Movimentos Sociais em tempos de Globalização: o MST e o Zapatismo, Revista NERA, 10, 11, p. 122-130.

Teubal, Migue. (2009). Brasil. In Giarraca, Norma; Teubal, Miguel (Coord). La tierra es nuestra, tuya y de aquel: la disputa por el territorio en América Latina. GEMSAL (Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina). Buenos Aires: Antropofagia.

Vergara Camus, Leandro. (2011). Globalización, tierra, resistencia y autonomía: el EZLN y el MST, Revista Mexicana de Sociología, 73, 3, 387-414.



Percepções de jovens mulheres em uma ocupação por moradia: Reivindicações por direitos sociais e políticas públicas.

Mirlene Fátima Simões¹
Monica Fonseca Wexell Severo²

Resumo

Apresenta-se neste estudo, pesquisa inicial acerca das identidades de jovens mulheres residentes em uma ocupação urbana, localizada no centro de São Paulo, capital, seus critérios de reconhecimento por direitos, suas bandeiras de lutas, suas perspectivas futuras e a dinâmica de organização em torno do movimento de moradia. O objetivo desta pesquisa é buscar as identidades das jovens moradoras e as histórias que se cruzam a partir do espaço de trocas, a ocupação, que reescreve trajetórias.

Palavras chave

Mulheres jovens; Movimentos sociais de jovens; Direitos sociais

Introdução

As jornadas de junho de 2013 em que jovens ocuparam as ruas das principais cidades do Brasil contra o aumento da tarifa de ônibus despertaram uma nova onda militante: em grande parte jovens mulheres foram participantes como também lideranças do movimento. Passados três anos outro movimento, as ocupações secundaristas escolares, que teve início em São Paulo, mas ganharam diversos outros estados em poucos meses, também despontaram jovens mulheres como lideranças. As escolas ocupadas tinham em sua organização as jovens, as mães delas e suas amigas como as principais mobilizadoras (Simões, 2016). Esses dois momentos demonstram uma mudança nas configurações do movimento de jovens: o contexto de exclusão, as necessidades locais, o pluralismo de reivindicação, a integração de processos e conhecimentos e a identidade com a luta de outras mulheres.

Outro movimento com forte presença de mulheres e, em maioria, mulheres jovens, são as ocupações por moradia, presentes nas grandes capitais brasileiras, fenômeno que começa na década de 1990, mas ganha força a partir da década de 2010, e se torna espaço de vida e resistência especialmente para jovens mães.

Assim como descreve Freitas (2014):



As mulheres pobres são frequentemente as maiores atingidas pela leva diária de despejos ocorridos [...]. Seja porque são as chefas da família em que não existe uma figura masculina, seja porque são trabalhadoras na própria casa. (Freitas, 2014)

Elas são responsáveis em tentar alternativas criativas para não morar na rua e poder manter as estruturas mínimas de um lar: dignidade, segurança, sociabilidade.

Apresenta-se neste estudo as identidades de jovens mulheres residentes em ocupações urbanas, seus critérios de reconhecimento por direitos, suas bandeiras de lutas, suas perspectivas futuras. O objetivo desta pesquisa é buscar as identidades das jovens moradoras e as histórias que se cruzam a partir do espaço de trocas, a ocupação, que reescreve trajetórias.

Entende-se que recentemente os movimentos de ocupação liderados por mulheres também foram estimulados pelas teses feministas e realocaram os sujeitos e os lugares. Os espaços privado e público, as tarefas de homem e de mulher, o que é de casa e o que é de fora, todas são concepções que foram questionadas pelas teses feministas e que fazem parte, muitas vezes inconscientemente, do cotidiano das jovens moradoras da ocupação. Essas novas identidades, que são parte integrante das gerações de jovens mulheres, permeia as lutas, a organização e suas reivindicações.

Importante destacar que as teses e teorias, ganham novos formatos e explicações diante das necessidades e das mudanças cotidianas da vida das pessoas. Com as jovens mulheres isso é bastante perceptível, ganharam outras interpretações e ramificaram por entre grupos diversos. Isso permite revigoramento, profundidade, diversidade e atualidade da tese, possibilitando construir identidades através da diferença (Gonzaga, 2018).

Esse debate sobre as novas teses feministas, novo feminismo ou simplesmente feminismo contemporâneo e as percepções dos movimentos de ocupação ficará para um outro momento da pesquisa, dada sua complexidade e a necessidade de elaborar entrevistas qualitativas. Mesmo assim, as autoras do presente estudo ressaltam, como dito acima, a importância de conceitos, teses e debates de tais teorias no cotidiano atual da vida dessas jovens.

Verificou-se junto ao movimento de ocupação que a reivindicação por direitos sociais e especialmente o direito à moradia é debatido cotidianamente. O medo da reintegração é constante e assim, motivadas pelo apreço em ficar no local que ocuparam, as jovens se adentram em aprender a urgência de políticas públicas.



O que observou-se na ocupação Mauá, objeto dessa pesquisa, foi a ausência de políticas públicas de habitação, estagnada desde 2016, como o próprio movimento informou e, para corroborar com essa ausência de políticas, a ausência de dados sobre tais ocupações por parte dos órgãos públicos, que atribuiu às grandes corporações e construtoras seu papel de controle e democracia dos espaços da cidade.

No próximo capítulo será apresentada as características da ocupação objeto deste estudo: a ocupação da Rua Mauá.

“Ou a gente come ou paga aluguel”: Caracterização de ocupações no centro paulistano

A ocupação Mauá fica em frente a estação da Luz, na Rua Mauá, e desde 2007 seus moradores, 237 famílias, cerca de mil pessoas ao total, cuidam, vivem e promovem o espaço. Trata-se do antigo Hotel Santos Dummont e como outras ocupações, o abandono do prédio e o acúmulo de dívidas fez com que o movimento se organizasse em torno de sua ocupação.

O movimento de ocupação da Rua Mauá é liderado por uma mulher, Ivaneti Araújo, a Neti, uma das coordenadoras do Movimento de Moradia na Luta por Justiça – MMLJ. Neti ocupou pela primeira vez um prédio com 25 anos e duas filhas pequenas, hoje, vinte anos depois, passou por vários endereços (os mandatos de reintegração são constantes) e se estabeleceu a alguns anos no prédio da rua Mauá.

Neti que recebe as visitas e apresenta os dados sobre a ocupação Mauá. Nesses onze anos de ocupação Mauá, em meio a muitos processos e constante atuação dos moradores em atos na prefeitura, em 2014, na gestão do então Prefeito Fernando Haddad, o prédio foi decretado como de interesse social. Desde então, muitas idas e vindas, disputa judicial e, finalmente em dezembro 2017 a prefeitura adquiriu o prédio por meio da Secretaria Municipal de Habitação. Até o fechamento desse estudo, em janeiro de 2019 nenhuma outra ação por parte da prefeitura municipal tinha sido feito.

Neti reforça que a compra do edifício ainda não é garantia para os moradores. Ela exemplifica: desde o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, em 08 de maio de 2018, também no centro da cidade, que as ocupações tem sido vistoriadas pela prefeitura, dando possibilidade, assim como afirmou Neti, para que qualquer problema no prédio pudesse ser o motivo para a desocupação. Tanto isso foi verdade que no dia 16 de maio funcionários da prefeitura e da Defesa Civil, vistoriaram o prédio da Rua Mauá.



Como apontado pelas lideranças do movimento de ocupação essa iniciativa é um dos caminhos que o poder público utiliza com o objetivo de criminalizar os movimentos de ocupação, já que o prédio da Mauá, por exemplo, foi construído após as especificações técnicas dos bombeiros e da defesa civil e, por isso, as normas técnicas precisam ser adequadas e não somente vistoriadas.

As lideranças ainda lembram que o espaço que se tem para morar nem sempre é o melhor: as ocupações não tem sistema de água, luz e esgoto regularizados, ao mesmo tempo que o centro da cidade é o local onde se tem emprego. Para as mulheres jovens, sem formação e com filhos, um local no centro é o espaço ideal para cuidar da família, trabalhar e sustentar as necessidades. Neti lembra que “quem mora aqui é mãe solteira, é jovem sem escola, é jovem ex-detenta que a família abandonou, por isso que a maior parte das lideranças também é de mulheres” (Nota das autoras, 2018)

O centro é local onde se encontra o emprego, como dito acima, e também o local dos alugueis mais caros da capital paulista. O descaso do setor público para com as leis que norteiam as moradias de interesse social são constantes. É o que será apresentado no próximo capítulo.

(Im)Precisão de dados: A que interesses servem essas técnicas

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (Declaração Universal dos Direitos Humanos, Art. 25).

Os dados oficiais sobre as condições de moradia nos cortiços e assemelhados na cidade de São Paulo não são atualizados de forma regular. Tampouco estão consolidados em um único documento. As ocupações realizadas pelos cidadãos em prédios outrora abandonados se enquadram nesta categoria de moradia, segundo o instrumento normativo municipal conhecido como Lei Moura, nº 10.928, de janeiro de 1991. Segundo esta Lei,

Art. 1 - Define-se cortiço como a unidade usada como moradia coletiva multifamiliar, apresentando, total ou parcialmente, as seguintes características: a) constituída por uma ou mais edificações construídas em lote urbano; b) subdividida em vários cômodos alugados, subalugados ou cedidos a qualquer título; c) várias funções exercidas no



mesmo cômodo; d) acesso e uso comum dos espaços não edificadas e instalações sanitárias; e) circulação e infraestrutura, no geral precárias; f) superlotação de pessoas.

Em outras palavras, cortiços são habitações urbanas em que as múltiplas famílias não encontram um padrão mínimo de aceitabilidade nos serviços de infraestrutura (abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário) e onde não há espaço interno suficiente para o número de moradores.

O penúltimo censo de cortiços e assemelhados foi realizado há cerca de duas décadas, quando a Fundação Seade identificou que cerca de 600 mil pessoas residiam em precárias habitações desse tipo.

Nas pesquisas realizadas pelo Seade, em 2000, referência para o Programa, o número de cortiços na área central da cidade de São Paulo era estimado em 24 mil, nos quais moravam 160 mil famílias e 596 mil pessoas – o que correspondia a 6% da população do município. [...] As mulheres representavam 34,7% dos chefes de família dos cortiços e, entre famílias cujos chefes possuíam idade superior a 40 anos, quase 60% deles eram do sexo feminino. (Governo Do Estado De São Paulo, 2012, p. 05).

Em 2018, a Prefeitura anunciou chamada pública para contratação de pesquisa de cortiços e assemelhados. No entanto, os dados obtidos ainda não estavam disponíveis em janeiro de 2019 ocasião em que finalizamos esta etapa do estudo.

Dados da Secretaria Municipal da Habitação, realizados pelo Grupo de Mediação de Conflitos, demonstram que em 2018 a cidade de São Paulo tinha 206 ocupações que abrigavam 45.872 famílias (São Paulo, SEHAB, 2018). Segundo esses dados, a maior parte das ocupações está localizada no centro da cidade (53), ao mesmo tempo em que a maior parte das famílias está concentrada nas ocupações da região leste (13.859 famílias). Os dados não são precisos pois ao mesmo tempo que aponta a existência de 53 ocupações no centro, também identifica que pode chegar a 70.

Também segundo dados da SEHAB, “na cidade de São Paulo, mais de 30% dos moradores, ou seja, cerca de 3 milhões de pessoas vivem alguma precariedade urbana” (PMSP, 2010, p.12). Esse enorme contingente divide-se por cortiços, favelas e loteamentos irregulares, desvinculado da chamada “cidade formal”.

O Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, entidade não governamental que atua em parceria com instituições de ensino e órgãos públicos, afirma que na capital paulista “existem cerca de 900 mil moradias precárias – incluindo favelas, cortiços e ocupações, habitações estas que necessitam de melhorias ou da produção de nova estrutura”. Ao



mesmo tempo, “segundo dados do IBGE 2010, existem na capital cerca de 290 mil domicílios não habitados, sem contar prédios comerciais vazios”. Ou seja, conforme estes dados, quase um terço do déficit poderia ser sanado com a adequação e destinação deste patrimônio já constituído.

Essa contradição entre o déficit de moradias, por um lado, e um enorme número de imóveis vagos, por outro, não é uma especificidade da capital paulista. “De acordo com a Pnad 2015, o Brasil possui 7,906 milhões de imóveis vagos, 80,3% dos quais localizados em áreas urbanas e 19,7% em áreas rurais. Desse total, 6,893 milhões estão em condições de serem ocupados”, informa a Fundação João Pinheiro (2018, p.37).

Em São Paulo, a já citada Lei Moura prevê atendimento a esta população que vive de forma precária, seja com a construção de moradias ou com a adequação das já ocupadas.

Art. 8º O Executivo promoverá a criação de programas específicos para garantir o acesso a condições adequadas de moradias, à população moradora de cortiços, ao mesmo tempo em que poderá financiar melhorias nos cortiços, mediante contratos coletivos firmados entre as entidades representativas de moradores, o proprietário e a municipalidade, garantindo sempre a permanência dos primeiros por prazo a ser ajustado em função do investimento previsto. (Redação dada pela Lei nº 11945/1995).

Nota-se, no entanto, que as ações de gestão para a concretização das políticas públicas que poderiam tornar realidade o texto da Lei parecem não se desenrolar na mesma velocidade em que se incrementa a desigualdade. Exemplo disso é a tramitação do Projeto de Lei que estabelece o Plano Municipal de Habitação (PMHB), que tramita desde 2016 (PL 619/16). Elaborado com a participação da população paulistana, aponta diretrizes e metas mínimas de produção de moradia na cidade; garante a gestão participativa e determina a deliberação dos instrumentos e fontes de financiamento habitacional. O PL, por sua vez, segue determinações do Plano Diretor Estratégico (PDE) da capital. O PDE é um instrumento de planejamento urbano obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes (Brasil, 2015, art. 182, § 2º; LEI 10.257/2001, art. 41, inciso I). Deve ser elaborado de forma participativa, segundo determinação da Constituição de 1988 (CF 1988), cujos artigos 182 e 183 foram regulamentados no Estatuto das Cidades, de 2001 (LEI 10.257, de 10 de Julho de 2001). Ou seja, a reorganização dos espaços urbanos, assim como o reconhecimento da função social da propriedade urbana, ainda não foi efetivado. Mesmo que já tenham se passado 30 anos



da promulgação da Constituição Cidadã e todos estes instrumentos normativos tenham sido editados.

Na cidade de São Paulo, o embate sobre a regulamentação do direito ainda não se encerrou. O PL 619/16 representa a disputa de interesses entre os inúmeros despossuídos que lutam pelo direito à moradia e os poucos que representam a especulação imobiliária. Estes dois lados do conflito não contam, obviamente, com os mesmos instrumentos, “haja visto o agravamento da disputa pelo espaço urbano, as crescentemente violentas reintegrações de posse e tantas outras decisões judiciais que favorecem apenas os proprietários” (Avanci; Giannella, 2017, p. 07).

Mesmo que com pesquisas pouco atuais, trata-se de números bastante altos: 3 milhões de pessoas vivendo em situação de precariedade, quase 600 mil delas em cortiços e assemelhados. O registro, o monitoramento, a atualização dos dados, a possibilidade de mensurar o resultado das ações em séries históricas, são ferramentas fundamentais para a tomada de decisões, para a formulação e realização das ações do poder público. A dificuldade em encontrarmos tabulados dados precisos e oficiais sobre esta população certamente interfere na superação do gravíssimo problema.

E, ainda, identificar nesse universo as categorias mais vulneráveis como crianças, jovens, gestantes e idosos, torna-se tarefa árdua, onde o poder público mais uma vez renega sua função.

Entendemos que o desencontro de dados não é acidental, pois age como obstáculo para a transformação da realidade, favorecendo o lado da contenda que não é o dos trabalhadores de baixa renda, que lutam pelo direito de moradia digna no centro da cidade. “Exemplo dos mais eloquentes é a projeção da população que mora em cortiços no município de São Paulo, cuja proporção, dependendo da fonte consultada, varia entre 8% e 39% da população total”, afirmam Genevois e Costa (2001, p. 73).

Elementos que saltam aos olhos dos pesquisadores, ainda mais sabendo que, na última medição oficial,

houve preocupação, por parte da Fundação Seade, em não superestimar o déficit habitacional. Assim, quando determinada categoria ou componente englobava variações nas carências detectadas (com possíveis soluções por meio de reformas e/ou melhorias), essas situações foram englobadas na inadequação, e não no déficit, evitando-se que integrassem o contingente de domicílios a serem substituídos (com previsão de novas construções). (Genevois; Costa, 2001, p.80).



Em outras palavras, para aqueles a quem não é concedido o direito básico de moradia digna, sequer é permitido que sejam vistos de forma adequada. A não mensuração, a ausência de medições frequentes e oficiais, segundo os mesmos critérios que se exige para outros temas sociais, também representa uma forma de violação.

Sobre as Mulheres Jovens: De onde vem pra onde vão?

Esperava-se encontrar no movimento de ocupação a identidade que historicamente pudesse falar por si, o diálogo feminista e contundente de suas moradoras e as bandeiras do que guiaria as jovens mulheres no movimento de ocupação. Mas isso não ocorreu. As jovens encontraram um refúgio, um abrigo, um novo sentido para a vida de exclusão e violência que suas breves vidas tiveram e mais, tudo tinha que ser construído.

Para entender o contexto dessas jovens é importante relacionar a vida de exclusão que fazem parte. Lembra-se que o debate em torno dos direitos dos jovens ficou mais intenso ao longo de 2013, dado, em parte, pelos movimentos relacionados ao passe livre e também promovidos pela aprovação do Estatuto da Juventude. Mesmo assim, verifica-se que os direitos dos jovens no Brasil passam por limitações e obstáculos presentes tanto no campo institucional, político e legal, quanto teórico e acadêmico (Simões, 2015).

Segundo Minayo e Adorno (2013) a deterioração da vida social gerou um aumento no número de excluídos “sobretudo dos jovens que continuam sendo as maiores vítimas do desemprego no mundo inteiro, ao mesmo tempo em que mantém um lugar privilegiado nas estatísticas criminais”. (Minayo e Adorno, 2013, p. 586).

Ao considerar que entre 2016 e 2017 os 40% mais pobres tiveram variação de renda pior do que a média nacional, mulheres, negros e jovens foram marcadamente os mais prejudicados: tiveram o pior desempenho de renda, comparativamente a homens brancos adultos (Oxfam, 2018).

Houve retração geral da renda nacional desde então, produto da recessão que praticamente fez dobrar o desemprego no país, de 6,8% em 2014 para 12,7% em 2017. Tal movimento afetou muito mais os pobres, as mulheres e a população negra. (Oxfam, 2018, p. 11)

Quando aumenta a pobreza e as diferenças sociais são abismais, as práticas ilícitas aparecem como alternativas de trabalho para os jovens. Minayo e Adorno (2013)



ressaltam que a prática de aliciamento de jovens para o crime organizado, a prostituição e o tráfico de drogas, alimenta e movimenta o mercado ilegal, pois esses jovens “vivem em bairros pobres, desempregados, sem perspectivas (...)” (Minayo e Adorno, 2013, p. 587).

Verificou-se em muitos dos diálogos entre as jovens da ocupação que o motivo para terem ido morar na rua, muitas delas grávidas, foi para fugir da violência que estavam submetidas no bairro periférico que moravam. Outras, para fugirem de dívidas com o tráfico. Outras ainda porque perderam os contatos com familiares após período de reclusão em penitenciária. A ocupação representou uma nova vida para essas jovens.

Com relação ao trabalho, embora os jovens sejam concebidos perante as autoridades, como também na sociedade de forma geral, como trabalhadores, a relação correspondente ao emprego carrega consigo diferenças entre os diversos grupos e/ou classes sociais:

Se, para muitos adolescentes e jovens, o trabalho pode ser uma opção que, havendo determinadas características e parâmetros, poderia, inclusive, se articular à educação para preparação da entrada futura no mercado de trabalho de forma permanente (caso dos estágios, por exemplo), para a maioria, o trabalho aparece cedo como destino vinculado à possibilidade de garantia de necessidades básicas de sobrevivência pessoal e familiar, mas também de emancipação financeira. (Segovia et al, 2009, p. 192)

Seguido a isso, as possibilidades de trabalho estão associadas, na maior parte das vezes, às condições de ensino, mas na ocupação o que se verificou com as jovens é que a maioria não tem formação básica, dadas todas as condições adversas em que viveram na infância e começo da juventude. Em sua grande parte o trabalho ocasional, informal, precário e com baixos salários são as condições mais vividas por essas jovens.

A liderança da ocupação Mauá, a Neti, é exemplo desses dados: começou trabalhar ainda criança com os pais, não finalizou o ensino fundamental, quando perdeu emprego foi morar na rua com três filhos. Para fugir da violência, entrou para o movimento de ocupação. Na ocupação Mauá encontra-se outros casos bem semelhantes a de Neti, como da Daniele:

Há oito anos na ocupação, Daniele, 29, é uma das moradoras mais antigas. A mais velha de oito filhos saiu de Santa Quitéria do Maranhão, cidade que fica a 350 km de São Luís, para São Paulo buscando trabalho junto com o primeiro marido. “Um amigo dele disse que aqui é mais fácil de achar emprego. Ficamos um tempo morando com ele, depois alugamos um apartamento na Mooca, na zona leste da capital. Quando meu filho nasceu,



tive que parar de trabalhar como vendedora para cuidar do Nicolas”, conta. Foi nesse período que a situação começou a apertar, segundo ela, já que dos R\$ 900 que o companheiro ganhava fazendo entregas para uma distribuidora, R\$ 550 iam pro aluguel. “Estávamos há três meses e meio morando lá e o aluguel já estava atrasando”, lembra. (MTST, 2018)

Ressalta-se nesta pesquisa a interpretação feita por Oliveira (1998), de que o capitalismo desenvolvido assume o perfil totalitário nos países em desenvolvimento, tal como no Brasil, e a exclusão “não no seu sentido mais pobre, o da exclusão do mercado e do emprego, mas no seu sentido mais radical: o de que, agora, dominantes e dominados não partilham o mesmo espaço de significados, o mesmo campo semântico.” (OLIVEIRA, 1998, p. 202), traduz o aspecto desintegrado e totalitário da democracia.

Ainda há que se considerar outro princípio, verificado na ocupação estudada de forma muito constante: a gravidez precoce, em sua maior parte longe de ter sido uma escolha das jovens.

Lembra-se que a gravidez na juventude representa um problema com relação ao planejamento futuro das jovens mães, no que diz respeito a sua saúde, à permanência na escola e o acesso ao trabalho, além do que, “é um fenômeno que pouco se alterou na última década, tendo inclusive aumentado nos anos mais recentes [...]” (UNICEF, 2011). E ainda: 76% das brasileiras de 12 a 17 anos que tem filhos não estudam (IPEA, 2016); 58% dessas jovens não estudam nem trabalham (IPEA, 2016); um em cada cinco bebês nascidos por ano no Brasil é filho de jovens nesta idade (DATASUS, 2017); no Brasil, Norte e Nordeste tem os maiores índices de gravidez precoce: quase um terço (DATASUS, 2017) e 66% das gravidezes em jovens são indesejadas (Ministério da Saúde, 2017).

A gravidez não planejada interrompe a formação educacional, afetiva e social das jovens mães bem como, de acordo com o relatório da UNICEF, aumenta a pobreza, a exclusão social e as condições precárias de trabalho. A gravidez na juventude é um dos problemas que mais atinge as jovens pobres dos países em desenvolvimento e, por isso, sua proteção e cuidados precisam estar nas prioridades do Estado. Convém frisar que, de acordo com relatório da UNIFESP (2017), quanto mais periférica e vulnerável a população, mais mães jovens, essa condição agrava e perpetua o ciclo de pobreza e gera mais gestações antecipadas. Quanto menos programas de educação sexual nas escolas, por exemplo, maiores serão os índices de gravidez precoce, assim como quanto menor a perspectiva educacional dessas jovens, maiores as chances de



gravidez. Provém desses dados um dos fatores da insistente evasão escolar vivida principalmente no ensino médio no Brasil, assim como da violência persistente contra as mulheres.

Jovem mãe da ocupação Mauá é exemplo desses dados:

Aos 21 anos, Fabrícia deixou o Paraná após se separar do pai do primeiro filho, com quem havia se casado aos 14. Em Osasco, na Grande São Paulo, cobria folga de outras funcionárias como camareira, mas o valor não dava para pagar o aluguel de R\$ 200. “Foi quando eu comecei a me envolver no crime. Tava passando muita dificuldade. Abrir um armário e não ter uma bolacha, não ter um leite. E ele [o filho] era pequenininho, tomava leite, usava fralda”, conta. (MTST, 2018)

Fabrícia, hoje com 35 anos, cumpriu seis anos de reclusão, e encontrou na ocupação o espaço para reiniciar a vida com os filhos e tentar um emprego formal.

Pode-se afirmar, então, assim como argumenta Caccia-Bava (2004), que os jovens no Brasil vivem em estado de desproteção social e institucional, e em situação de abandono no que diz respeito aos seus direitos.

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (2018), vive-se a maior população de mulheres jovens, entre 15 e 29 anos, da história. Isso demonstra muitas oportunidades para a civilização, tais como potencial criativo, alta energia para trabalho e escola, gerações de novas vidas. Mas por outro lado, apresenta também grandes desafios: gravidez precoce e indesejada, casamentos arranjados e forçados, pobreza e violência.

No Brasil, dados da ONU (2017), indicam que uma a cada quatro jovens se casa antes dos 18 anos, uma a cada cinco jovens dá à luz antes dos 19 anos, e seis de cada dez meninas de cinco a dez anos sofre violência física em casa, decorrente de medidas de ‘disciplina’ para ‘bons comportamentos’. Desses dados, mais de 70% são jovens, oriundas de bairros periféricos, com pouco infraestrutura.

Quanto às jovens em contexto de ocupação por moradia, poucos são os dados que existem acerca de suas condições de vida e perspectivas futuras. Percebe-se, como vivenciado na ocupação Mauá, a persistente exclusão dessas jovens: muitas sem documentos pessoais, sem formação básica escolar, sem formação profissional, com filhos no colo, assim como Neti relata sua própria condição:

Morava no emprego, no quatinho de empregado, com comida diferenciada. Ouvi até algumas patroas dizer, pelo fato de eu ser negra: ‘Você vai para a cozinha depois. Você



serve, vai para o seu quarto e depois você volta para a cozinha e come — aproveita e lava a louça'. Ou seja, eu sentia que eu tinha que esperar para poder sobreviver do resto. (MTST, 2018).

A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável prevê: “Assegurar a todas as jovens mulheres condições para realizar seu potencial e participar em igualdade de oportunidades da vida familiar, comunitária e de organizações sociais” (ONU, Agenda 2030, 2018)

Nesse sentido, os movimentos sociais em que mulheres jovens participam e/ou lideram busca sua ação na linha afirmativa dos Direitos Humanos, referendando o que se tem como direitos mas relacionando novos direitos. Lembra-se que as Jornadas de junho de 2013 e as ocupações secundaristas em 2016, foram movimentos organizados principalmente por jovens mulheres, o que até três décadas passadas isso não ocorreria. Outra característica dessas novas abordagens dos movimentos sociais de jovens mulheres é a constante busca por saber o que é de direito, o que pode ser políticas públicas de inclusão e como passar essa informação a outras jovens.

Em síntese: um breve olhar sobre os movimentos dos jovens a partir de junho de 2013 leva-nos a observar: há múltiplos processos de subjetivação na construção dos sujeitos em ação – os acontecimentos no calor da hora provocam reações que geram novas frentes da ação coletiva. A composição dessas frentes é complexa, diversificada, com múltiplos atores, propostas e concepções sobre a política, a sociedade e o governo. (GOHN, 2018, p. 125)

As jovens mulheres se apropriam do debate político, e recriam sua participação política. É esse movimento que chega até as jovens mulheres moradoras da Ocupação Mauá. Entende-se, assim como expresso por Araújo e Fachinio (2018), que a busca por direitos sociais no século XXI é plural, trata das necessidades locais, integra processos e conhecimento.

Ainda um debate inicial

A presente pesquisa que ainda encontra-se em fase de execução, apontou, de forma geral que as jovens que ocupam o prédio da Rua Mauá são: grande parcela se declara afrodescendente, uma parte considerável são jovens mães que moram e cuidam sozinhas de seus filhos, grande parte começou a trabalhar ainda criança e, por isso, não iniciou o ensino médio, são jovens que moraram na rua (dado o desemprego) e viram na ocupação um local seguro de vida e perspectivas futuras.



Mesmo com a organização do movimento por moradia e com os dados do déficit habitacional em São Paulo, capital, ainda assim se reconhece a ausência do poder público em solucionar as condições de vida em ocupações, delegando a iniciativa privada a solução para tal problema.

As jovens em contexto de ocupação demonstram com suas vidas formas de resistência e luta para que a sociedade paulistana seja mais inclusão que tenha justiça social e garantia de direitos.

Notas

¹(Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, Campus Sorocaba) – contato: mirlenefatimasimoes@gmail.com

²(Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul – UEMS, Campus Paranaíba) – contato: monicafwsevero@hotmail.com

Referências

Araújo, A. M. C.; Fachini, R. Mulheres e Direitos Humanos no Brasil: Avanços e desafios. In: *Jornal da UNICAMP – Direitos Humanos*. Disponível em: <<https://bit.ly/3hLC4xL>>. Acesso em 20/03/2018

Avanci, Juliana; Kohara, Luis; Giannella, Yuri. Edifício União: do risco de despejo à garantia do direito à moradia. *Série Caminhando para a cidade que queremos*. São Paulo: Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. 2017. 24p. Disponível em <<https://bit.ly/3bdyNX4>>. Acesso em 16.12.2018

Brasil. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. Brasil.

Caccia-Bava, A. *Direitos Civis dos Jovens e a Insegurança Urbana*. In: *Estudos de Sociologia*, 16: 41-64, 2004.

Centro Gaspar Garcia De Direitos Humanos. Programa Moradia Digna. Disponível em <http://gaspargarcia.org.br/projetos/programa-moradia-digna/> Acesso em 15.12.2018.

Datasus. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil. *Dados Gravidez Precoce*. Disponível em: <<https://bit.ly/3pXhhKJ>>. Acesso em Janeiro de 2018.

Declaração Universal Dos Direitos Humanos. Disponível em: <<https://uni.cf/2Xfqt0w>>. Acesso em 12.01.2019

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados PNAD 2016. Brasil, 2016.

Freitas, S. M. Direitos Humanos no Brasil: aportes para compreensão das ambiguidades e armadilhas persistentes. In: *Em Pauta*, Rio de Janeiro, n° 34, v. 12, 2014 (p. 71-89)



Fundação João Pinheiro. Déficit habitacional no Brasil 2015. Diretoria de Estatística e Informações. Belo Horizonte: FJP, 2018. 78p. Disponível em: <<https://bit.ly/3s0hHBF>>. Acesso em 05.01.2019.

Genevois, Maia L. B. P.; Costa, Olavo V. Carencia habitacional e Déficit de moradias: questões metodológicas. IN: Revista São Paulo em Perspectiva. São Paulo: Fundação Seade. 15 (1). p. 73-84. 2001. Disponível em: <<https://bit.ly/393dHaZ>> Acesso em 17.12.2018.

Gohn, Maria da Glória. Jovens na Política na Atualidade: uma nova cultura de participação. Caderno CRH, Salvador, v. 31, n. 82, p. 117-133, Jan./Abr. 2018

Gonzaga, Juliane de Araújo. Novo feminismo: acontecimento e insurreição de saberes nas mídias digitais. Tese de doutorado. Faculdade de Ciências e Letras. Programa de Pós Graduação em Linguística e Língua Portuguesa. Maio 2018.

Governo Do Estado De São Paulo. Relatório geral do programa de atuação em cortiços. São Paulo: CDHU. 2012. Disponível em: <<https://bit.ly/2JQjZCk>>. Acesso em 27.11.2018

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. *Dimensões da experiência juvenil brasileira e novos desafios às políticas públicas*. Brasília: Governo Federal. 2016

Minayo, M. C. S.; Adorno, S. *Risco e (in)segurança na missão policial*. In: *Ciência & Saúde Coletiva*, 18 (3): 585-593, 2013.

Ministério Da Saúde. *Gravidez na adolescência tem queda de 17% no Brasil*. Disponível em <http://u.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/28317-gravidez-na-adolescencia-tem-queda-de-17-no-brasil> Acesso em dezembro de 2017.

MTST. 20 Anos de História: luta, organização e esperança nas periferias do Brasil. São Paulo: Autonomia literária, 2017.

Múrias, C. Direitos das meninas, raparigas e jovens mulheres. A agenda e Compromissos de Direitos Humanos e Desenvolvimento. Cadernos Especiais. Lisboa: Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento, 2017

Oliveira, F. *Os direitos do antivalor: A economia política da hegemonia imperfeita*. Petrópolis: Vozes, 1998.

OXFAM. País Estagnado: um retrato das desigualdades brasileiras. 2018. Disponível em: <<https://bit.ly/2Lm1V3t>>. Acesso em 12.01.2018

Pinheiro-Machado, R. Vi mulheres brigando com homens. Disponível em: <https://theintercept.com/2018/08/20/vedetes-homens> Acesso em 22/09/2018



Prefeitura Do Município De São Paulo. A Cidade Informal no Século XXI. Secretaria de Habitação- SEHAB, São Paulo. Superintendência de Habitação Popular. 2010. Disponível em: <<https://bit.ly/2KWRpQp>>. Acesso em 07.01.2019

_____. LEI N° 10.928, DE 8 DE JANEIRO DE 1991. Disponível em <<https://bit.ly/3rZppfB>>. Acesso em 09.01.2018

_____. Metadados Das Camadas Geográficas Do Habitasampa. Disponível em: <<https://bit.ly/35dg9e6>>. Acesso em 17.12.2018.

Santiago, Tatiana. Cidade de São Paulo tem 206 ocupações onde moram 45 mil famílias. G1 SP. Publicado em 02/05/2018. Disponível em: <<https://glo.bo/2MCi6dv>>. Acesso em 12.12.2018.

Segovia, D. et all. *Sociedades sul-americanas: o que dizem jovens e adultos sobre as juventudes*. Rio de Janeiro: IBASE, 2009.

Simões, M. O Estatuto da Juventude no Brasil (2004-2013): relações de poder, disputas por hegemonia e direitos humanos. Jundiaí: Paco Editorial, 2015.

Sposito, M. P. *Entre luzes e sombras: o passado imediato e o futuro possível da pesquisa em juventude no Brasil*. In: Rev. Bras. Educ. vol.22, n.71, Rio de Janeiro, 2017.

UNICEF. *Situação mundial da infância 2011: Adolescência uma fase de oportunidades*. Caderno Brasil. Disponível em: <<https://uni.cf/38huPL6>>. Acesso em janeiro de 2012.

UNIFESP. Universidade Federal de São Paulo. *Anais do III International Symposium: adolescence(s): Vulnerabilities, Protagonisms and Challenges*. Disponível em <https://www.adolescenciaunifesp.com/todos-os-anais> Acesso em dezembro de 2017.



Constituição do processo histórico do movimento lgbt na cidade de manaus-am: Por entre desafios e perspectivas de emancipação.

André da Silva Martins¹
Luciana Henrique da Silva²

Resumo

O objetivo desse estudo tem com sua problemática central em analisar a constituição do processo histórico do movimento LGBT na cidade de Manaus-AM: por entre desafios e perspectiva de emancipação. O texto foi construído à luz da pesquisa qualitativa, envolvendo procedimentos de produção de dados, através de um roteiro de entrevista e juntamente com levantamento de referenciais teóricos informações oriundas das leituras feitas da investigação de pesquisa de campo, abordando temas referentes à sexualidade e a diversidade sexual, permitindo conhecer de forma sùmula sobre a produção histórica desses tópicos, destacando modelos e valores em épocas diferentes, passando por modificações e novas formas de interpretação, proporcionando conhecer como se iniciou e como caminha o movimento LGBT no cenário brasileiro e na cidade de Manaus-AM. Verificando que o movimento LGBT na cidade de Manaus, apresenta alguns desafios e progressos que caminham a passos lentos, ressaltando a falta de representatividade no cenário político e enfatizando o Conselho Estadual do Combate à Discriminação como instância que garante discussões e buscas de políticas públicas que visam garantir direitos e cidadania. Espero que este estudo possa contribuir para as discussões sobre o movimento LGBT, possibilitando além das reflexões, suscitar a demanda de novas investigações que se debruçam sobre a temática em pauta, sugerindo diretrizes e ações para ser amplamente discutidas na elaboração de políticas públicas voltadas ao segmento LGBT na cidade de Manaus-AM

Palavra chave

Movimento Histórico LGBT; Movimentos Sociais; Orientação Sexual: Identidade de Gênero; Diversidade Sexual.

Introdução

O interesse temático surgiu a partir do meu convívio social com pessoas, colegas e amigos que se identificam como LGBT. A motivação pelo tema aumentou ainda mais, após minha participação na II Mostra de Direitos Humanos LGBT, momento em que me senti mais interessado em procurar investigar sobre o assunto, tendo a oportunidade de conhecer as reais condições deste grupo social desprestigiada pela sociedade, que se



teve início a parti de 1970 por um movimento homossexual na criação de pequenos grupos que foram ganhando forças principalmente com o advento da AIDES, em se pensar coletivamente em políticas públicas na garantias em seu direito sintetizando momentos histórico até os dias atuais, pelas narrativas do entrevistados com a finalidade de identificar os inúmeros desafios que o movimentos LGBT na cidade de Manaus tem ainda pela frente. Toda pesquisa parte de um propósito de investigação. Tal propósito encontra-se relacionado com uma inquietação, com uma questão que visa trazer respostas e que é respondida por meio de objetivos traçados. A questão central da pesquisa e deste modo, conhecer como se desenvolveu o Movimento LGBT em Manaus, foi: De que modo se encontra constituído o processo histórico do movimento Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros (LGBT) na cidade de Manaus-AM e quais seus interesses político- sociais concernentes à atuação cidadã e possibilidades de emancipação? Para tal foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) identificar numa perspectiva da história oral as motivações promotoras da organização do movimento LGBT na cidade de Manaus-Am, e b) averiguar os interesses político-sociais concernentes à atuação cidadã, do movimento LGBT que reside na cidade de Manaus-AM.

A partir de então, venho me dedicando à ampliação do conhecimento sobre a temática, participando de eventos científicos, tais como seminários, palestras, mostras, conferências, debates, dentre outros.

Aspectos históricos do movimento LGBT no Brasil

Não podemos pensar na trajetória do movimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), sem fazer um resgate histórico do contexto do seu surgimento, as principais influencias ao longo dos anos até os dias atuais, logo, se trata de compreender a árdua batalha do movimento em direção ao direito de igualdade.

Antes de tudo, é importante enfatizar que a política LGBT está inserida na ótica dos movimentos sociais. Desse feito, compreender o que são os movimentos sociais é fator imprescindível para tal contextualização. Segundo Gohn (1995, p. 44), os movimentos sociais:

[...] São ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo político de força na sociedade. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em situações de conflitos, litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo social e político [...] que criam uma



identidade coletiva ao movimento a partir de interesses em comum. Esta identidade coletiva decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo.

Como se pode observar, os movimentos sociais se constituem a partir de objetivos comuns de um grupo que orientam as demandas do coletivo em busca de conquistas que visem a garantia de direitos, deveres e atuação política. Nesse foco, organizam-se a fim de compartilhar experiências e, ao mesmo tempo, possibilitar a construção de uma ordem social alternativa (Santos, 2006).

É nesse espírito rebelde, sob ventos do ativismo LGBT latino Americano, que surge o movimento homossexual no Brasil, sua trajetória política se dá a partir de 1978 com a redemocratização do país, em que diversos grupos começaram a se organizar na luta por direitos (Caetano *et al*, 2018).

Facchini (2002), em seu estudo sobre a história da luta do movimento LGBT no Brasil, ao abordar a temática “Sopa de Letrinhas”, organiza uma linha histórica, dividindo-a em três partes e as classifica como “ondas”. Daí podemos inferir que essa classificação conota processos de construção/reconstrução, elaboração/reelaboração e/ou vice-versa.

A “primeira onda” refere-se ao momento histórico marcado pela ditadura militar, a partir de 1970. Quanto a “segunda onda”, esta delimita o cenário histórico da epidemia da aids cujo marco é o ano de 1982. A “terceira onda” inicia a partir do ano de 1990, refletindo sobre a garantia de direitos ao movimento LGBT. Essas ondas sintetizam e revelam momentos históricos marcantes, onde houve uma forte resistência e luta pela emancipação e garantias de direitos.

A autora analisa que, na “primeira onda”, a partir de 1970, predominantemente, o movimento homossexual nasce no Brasil em um contexto marcado pela repressão e censura promovidas pela ditadura militar. Tal posicionamento já tivera sido enunciado por Macrae ao afirmar que:

Em várias partes do mundo, incluindo o Brasil, a década de 1970 foi marcada pelo surgimento de política baseada no conceito de identidades pessoais. Abandonando as tradicionais organizações partidárias de direita ou de esquerda, surgiram novos movimentos sociais com o propósito particularista e imediatista, voltados para a resolução de problemas específicos que afetavam determinados grupos. (Macrae, 1997, p. 237)



Compreende-se que é em meio a esse contexto de busca de fortalecimento de “identidades pessoais” - que pequenas minorias isoladas da sociedade começam a ter visibilidade social, ao elaborarem novos esquemas políticos com o intuito de valorizar a identidade homossexual e lutar contra a discriminação (Macrae, 1997).

Neste período da “primeira onda”, criou-se então o jornal “Lampião”, visto como o principal veículo de comunicação da comunidade homossexual em meio a repressão. Nascido em abril de 1978, o Jornal Lampião da Esquina mais conhecido como Lampião tinha como uns dos seus principais objetivos publicações voltadas para homossexuais. “O lampião certamente se mostrava de grande importância, na medida em que sistematicamente aspectos políticos, existenciais e culturais da homossexualidade de forma positiva, [...], recusando enfoques pejorativos, até então hegemônicos” (Caetano *et al*, 2018, p. 43).

O “Grupo Somos” foi outro movimento importante criado nesse período, aderindo a novos esquemas políticos com o intuito de valorizar a identidade homossexual –, com a afirmação que homossexual é sujeito político. Foi o primeiro grupo a politizar a questão homossexual, com intuito de criar forças ao movimento homossexual. As pessoas do grupo se reuniam, compartilhavam suas aflições/inquietações e elaboravam estratégias para combater a discriminação sofrida pelos homossexuais.

Portanto, o jornal “Lampião” e o “Grupo Somos” se tornam pioneiros nesse processo de fortalecimento da identidade homossexual – e agentes que contribuíram na conscientização e abriram espaços para discussões com características sociopolíticas, a fim de eliminar ou pelo menos amenizar os preconceitos/discriminações referentes à diversidade de gênero e outras questões envolvidas na época (Facchini, 2002).

A “segunda onda” (1984-1992) corresponde a um período marcado pelo aumento da discriminação referente à homossexualidade, da violência física sofrida por essas pessoas e da epidemia da AIDS/HIV, conhecida na época como “peste gay” (Santos, 2006). Todos esses fatores multiplicavam tendências de divulgação depreciativas e discriminadoras através dos meios de comunicação, como os jornais e revistas da época – os quais reforçavam o preconceito ao adotar o termo “peste gay” para noticiar fatos relacionados a AIDS.

De todas as ocorrências referidas na “segunda onda”, podemos dizer que o advento da AIDS/HIV foi um dos assuntos mais comentados pela sociedade, que relacionava essa epidemia com a população gay. Isso fez com que o grupo homossexual se



organizasse buscando políticas públicas de prevenção, que passaram a estudar sobre as causas da doença, o que permitiu que se a desmistificassem como uma doença exclusiva do público LGBT.

Se, de um lado, ela [a AIDS] veio reforça antigos preconceitos que já pareciam ultrapassados [...], por outro, ela, pelo enorme drama social que evoca, coloca as sociedades e os Estados em confronto direto com as necessidades de implementar [...] políticas de prevenção, o que pode obrigar [...] a lidar diretamente com os gays organizados (Messeder, 2004, p. 59).

Nessa perspectiva, pelo enorme drama social da época, começaram a surgir grupos formados pelos próprios homossexuais com o intuito de responder sobre a epidemia de AIDS/HIV no Brasil (Santos, 2013).

A partir dessas ocorrências, esses grupos representaram uma nova forma de pensar e de construir políticas públicas favoráveis à comunidade gay, tornando a comunidade LGBT mais visível, desta vez positivamente, através de programas e organizações não governamentais.

Um grupo que merece destaque nesse período é o “Grupo Gay da Bahia” (GGB), que protagonizou diversas mudanças no reconhecimento dos direitos dos homossexuais.

O Grupo Gay da Bahia é a mais antiga associação de defesa dos direitos humanos dos homossexuais no Brasil. Fundado em 1980 [...] oferece espaço para outras entidades da sociedade civil que trabalham em áreas similares, especialmente no combate à homofobia e prevenção do HIV e AIDS entre a comunidade e a população geral (GRUPO GAY DA BAHIA, 2017) Grupo Gay Da Bahia. O que é o GGB (nossa história). Disponível em ww.ggb.org.br. Acesso em: 05/05/2017

Analisa-se que os que até então eram o alvo da repressão, se tornaram protagonistas da resistência; e não parou por aí - outra importante ação foi realizada pelo “Grupo Triângulo Rosa” - no reconhecimento positivo da homossexualidade através de uma campanha que lutou pela mudança do Código de Ética no processo constituinte de 1986. Este grupo conseguiu alterar o termo “opção sexual” por “orientação sexual” na Constituição de 1986, minimizando o preconceito constantemente reafirmado pelos meios de comunicação (Santos, 2006).

A “terceira onda”, que se inicia a partir do ano 1992 até os dias atuais, representou um novo momento na militância homossexual, onde estes passaram a se organizar, a fim



de compartilhar e reivindicar possibilidades de construir o fortalecimento de uma ordem social alternativa (SANTOS, 2006).

Pereira (2009), em seu trabalho intitulado “Trajetória de reivindicação do movimento social LGBT por direitos e políticas públicas”, ressalta a contribuição social do poder Executivo a partir do ano 2000 na atuação da criação de projetos e planos no combate ao preconceito, discriminação exclusão e a desigualdade social, promovendo um avanço para a população LGBT:

Ao longo dos anos 2000, segundo o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Sexualidade – [...] existem quatro marcos principais no âmbito das ações do Poder Executivo, voltadas para a população LGBT: 1. Criação do Brasil Sem Homofobia (BSH) – Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual, em 2004; 2. Realização, em 2008, da I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, com o tema Direitos humanos e políticas públicas: o caminho para garantir a cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT); 3. Lançamento do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – PNDCDH-LGBT (2009); e 4. Publicação do decreto que cria o Programa Nacional de Direitos Humanos 3- PNDH 3 (2009) (IDEM, p. 6).

Das ações implementadas acima citadas, se destacaram o projeto “Brasil sem homofobia” (BSH), como fruto das reivindicações com pauta política e a I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transgêneros, considerada como o marco histórico mais importante da cidadania e direitos humanos LGBT, realizada em junho de 2008, buscando a consolidação de políticas públicas para a construção de uma sociedade democrática, justa e inclusiva (MELLO et al, 2010). Ademais, Pereira (2009) tece uma crítica dizendo que, por mais que se criem projetos, campanhas e leis voltadas à população LGBT – isso tudo ainda é muito limitado e insuficiente, sem contar as dificuldades associadas à diversos órgãos hegemônicos, por estar diretamente relacionado a um poder ideológico, pautado por valores de crenças e tradições, classificados como fundamentalistas.

Movimento LGBT em Manaus-AM: Contexto histórico e pretensões atuais

A partir desse panorâmica, em seu contexto histórico nacional, foi elaborado um roteiro de entrevistas, baseado nas leituras realizadas e na reflexão dos objetivos gerais e específicos, buscamos através das narrativas orais dos entrevistados apontar quando iniciou e como se constituiu o movimento LGBT em Manaus-AM. Pretendíamos ainda, obter respostas quanto às possibilidades de conquistas de direitos e/ou outras garantias



ao público LGBT e além de detectar as dificuldades/possibilidades emancipação na cidade.

A aplicação do roteiro de entrevista se deu do seguinte modo: com agendamento de datas, visando atender a disponibilidade individual de cada um; posteriormente as entrevistas foram feitas em ambientes de trabalho ou espaços públicos de modo que cada participante respondeu às perguntas do roteiro com motivação, envolvimento e interesse pela pesquisa em pauta.

Em Manaus-AM, o movimento LGBT vem lutando constantemente pela garantia de direitos que minimize questões relacionadas à homofobia, à violência e assassinatos de travestis e homossexuais. Tal luta se constitui por um processo histórico que denota um movimento marcado por desafios/superações, avanços/retrocessos. Nesse sentido, é pertinente questionar: O que torna Manaus-AM ser a primeira capital da Região Norte a ter altos índices de crimes, violência e assassinatos, vitimando a população LGBT? Quais políticas públicas estão sendo cogitadas no âmbito Legislativo, Executivo e Judiciário ao atendimento da comunidade LGBT e seus reflexos em Manaus-AM?

Nesse sentido, o movimento LGBT em Manaus-AM está inserido num contexto histórico de visibilidade na luta pelos seus direitos, labutando por políticas públicas que possam solicitar mudanças de valores e minimização das violências na capital amazonense.

O alto índice de assassinatos de homossexuais não é recente no Brasil. Uma pesquisa realizada em 1996 pelo Grupo “Gay da Bahia” (GGB), revelou de forma assustadora a estatística de que “[...] um homossexual é brutalmente assassinado a cada quatro dias vítima da homofobia que impregna a sociedade brasileira” (GREN, 2000, p. 24).

Monteiro (2002), em sua obra “O direito a ter direitos”, descreve que em 1999, entre os meses de janeiro a junho, foram registrados cinco casos de homicídios contra homossexuais na região Norte, fazendo com que o Amazonas ficasse entre os Estados brasileiros que apresentam os maiores índices de crimes cometidos à população LGBT.

Um caso que exemplifica essa forte violência contra o movimento LGBT em Manaus-AM, foi o assassinato de Francisco Adamor Guedes, mais conhecido como Adamor Guedes, um dos maiores líderes do movimento LGBT do Brasil e ex-presidente da Associação de Gays, Lésbicas e Travestis (AAGLT) do Amazonas. Ele foi morto com uma facada no pescoço no dia 27 de setembro de 2005 na cidade de Manaus, crime que até hoje se encontra impune.



Uma de suas principais lutas durante sua militância na cidade de Manaus-AM foi o combate à discriminação e ao preconceito na garantia dos direitos humanos relacionados à área da saúde e da educação. A luta pela visibilidade da população LGBT por meio de políticas públicas também visavam diminuir a violência e os assassinatos. É notório afirmar que Adamor Guedes deixou um legado de resistência e de muita coragem para todas as pessoas LGBT. Atitudes como as dele contribuíram significativamente para que o movimento se fortalecesse ainda mais em Manaus-AM.

Através da história oral, concedida por meio de entrevista pelos participantes da pesquisa por suas narrativas foi possível compreender como se deu esse processo histórico do movimento LGBT na cidade, vejamos:

Então... é interessante que o “Brasil sem Homofobia” (BSH) nasceu no ano de 2003, aqui em Manaus, no XI Encontro Brasileiro de GLBT e Transexual, que foi o XI EBGLT. Em 2005, nós participamos em Brasília de uma reunião, onde definimos que precisávamos ter conferências aqui em Manaus, porque em 2003 aconteceu o primeiro dado histórico. Portanto, podemos considerar que foi em 2003 a primeira vez que aconteceu um encontro de homossexuais no Amazonas, sendo que esse encontro vem sendo realizado desde à década de 1960 por algumas regiões do Estado Sul, Sudeste Centro-Oeste. Então, em 2003, no XI EBGLT, aqui em Manaus, foi a primeira vez que veio um representante do governo federal ouvir o que aqueles 577, mais ou menos assim, delegados, vindos de todas as regiões do país e mais alguns países vizinhos. Nós tínhamos naquela época cinco representantes de fronteiras participando do XI EBGLT. Então, foi massivamente divulgado e apoiado pelo governo local, que na época era o Amazonino Mendes. Ele tinha uma relação respeitosa com o movimento LGBT, tanto que ele chamou o Adamor Guedes e disse que iria apoiar. Ele apoiou o evento e nós realizamos dentro da estrutura do governo do Amazonas, com apoio do governo municipal e federal. Então, foi em 2003, que realizamos esse encontro desafiador, tanto para o Amazonas quanto para sociedade civil, né?! Foi a primeira vez que o governo federal mandou um representante da Presidência da República ouvir o que nós queríamos como propostas, né?! Nosso desafio era que as propostas fossem debatidas amplamente e que fossem implementados como políticas públicas dentro dos eixos de Educação Saúde, Segurança e Empregabilidade. Esses eixos eram pertinentes e prioritários para o movimento naquela época. A partir de 2006, nós conseguimos ver de fato nossas propostas sistematizadas e organizadas para que pudessem ser implementadas como políticas de Estado. Em 2008, foi realizada a I Conferência Nacional de Direitos Humanos LGBT, onde o Amazonas realizou uma Conferência Estadual, passando aos seus delegados defender as propostas nessa Conferência Nacional. Assim foi simbólico e significativo porque nós construímos políticas



coletivamente, mas a gente percebe que os direitos dessa comunidade não são efetivados como a gente gostaríamos que fossem. O Governo até que tem interesse de implementar, mas a gente passa por um processo da legislação, então os governos executivos tem interesse, mas o Legislativo não tem esse mesmo comprometimento. Em 2016, o Governo do Estado do Amazonas, depois da sua reforma política, cria uma Secretaria de Estado de Justiça de Direitos Humanos e Cidadania e o Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos, onde têm os segmentos sociais que reivindicam por direitos e por movimentações de políticas. É dentro desse departamento onde nós estamos inseridos, né?! Tem a Gerência de Diversidade de Gênero junto com demais gerências, né?! Nós precisamos dessa organicidade dentro dessa estrutura da administração pública para que a gente possa avançar nas políticas específicas, pois a gente não consegue entender uma política sem reconhecer as especificidades de cada segmento, né?! Então, para nós, LGBT, é uma a reivindicação desse direito também deve ser efetivada de fato dentro da estrutura estatal, né?! A gente só consegue isso através da movimentação, da mobilização e da articulação dos movimentos sociais de direitos humanos que fortalece a luta nossa LGBT (Participante 1).

O canal nesse aspecto histórico é o primeiro canal LGBT do Amazonas. O VLOGAY vem fazendo história no Estado porque a gente vem para botar a “cara no sol”, entendeu? A ideia de criar o canal veio através da minha insatisfação diante da invisibilidade dos LGBT nas redes sociais. A gente via muitos portais e perfis de Instagram de humor... sabe?! Às vezes, um humor preconceituoso, às vezes umas piadinhas que a gente vai observando que já não tem mais graça! Então minha vontade é também de comunicar com o pessoal. Aí criei o VLOGAY que vem fazendo barulho nessa contribuição para o movimento LGBT (Participante 2).

As falas dos dois participantes enunciam questões referentes ao movimento LGBT na cidade de Manaus-AM, no entanto, é na fala da participante 1 que podemos visualizar a linha do tempo sobre a concepção desse movimento, marcando o ano de 2003 como início das políticas LGBT na capital amazonense. Dessa feita, identifico que o “Brasil Sem Homofobia (BSH)”, destacado como o precursor do movimento LGBT em Manaus-AM, é criado com três principais objetivos: 1) inclusão da perspectiva de não discriminação por orientação sexual e promoção dos direitos humanos LGBT nas políticas públicas e estratégias do Governo Federal; 2) produção de conhecimento para subsidiar a elaboração, implantação e avaliação de políticas públicas destinadas ao combate à violência e discriminação por orientação sexual; 3) entendimento de que o combate à homofobia e a promoção dos direitos humanos é um compromisso do Estado e de toda a sociedade brasileira. Mello (2010), aborda que a implementação do Programa BSH e outros programas, planos e conferências foi importante na formulação



e implementação de políticas públicas para a população LGBT, com o desafio de transformar incipientes políticas públicas em efetivas políticas de Estado.

A criação do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT (CECD/LGBT) na cidade de Manaus-AM, no dia 26 de abril de 2017, foi produto de uma reelaboração e elaboração do Plano Nacional do Combate à Discriminação, criado em 2001 e vinculado ao Ministério da Justiça. Por meio desse Conselho, grupos militantes começaram a priorizar e reivindicar políticas públicas voltadas à promoção e cidadania dos direitos dessa comunidade (Mello, 2010). No entanto, esse Plano foi instituído somente em 2010 pelo Governo Federal para atender a demanda do movimento LGBT que vem desde a década de 1980 (com o advento do HIV) lutando pela garantia e implementação de políticas públicas para essa população. O Conselho Estadual de Combate à Discriminação na cidade de Manaus-AM, vem criando inúmeras possibilidades para se discutir não somente sobre o respeito à diversidade, mas formulando e propondo diretrizes de ações e promoção de defesa dos direitos LGBT.

Considerando o contexto analítico do movimento LGBT na cidade de Manaus-AM, podemos apresentar uma súmula enunciando que, o movimento LGBT em Manaus-AM, é oriundo de um processo histórico que se deu à luz de outros movimentos latino americano e nacionais e que, atualmente, luta pela garantia de direitos que minimizem preconceitos, violência, discriminação, assassinatos e elaboração de políticas públicas nos eixos da Saúde, Educação, Assistência Social e Judicial, objetivando dá voz, garantia e exercício de direitos e visibilidade à esse segmento. Contudo, todas os projetos e ações estão articulados num processo lento, mas que caminham em passos progressivos, com destaque a criação do Conselho Estadual do Combate à Discriminação, o qual possibilita espaços de discussão sobre temas específicos que visam promover as conquistas acima apontadas, além de garantir a emancipação do público LGBT manauara.

Reflexões Finais

O estudo possibilitou constituir um breve resumo histórico do movimento LGBT na cidade de Manaus-AM, sua gênese e desenvolvimento. Proporcionando conhecer como se iniciou e como caminha o movimento LGBT no cenário brasileiro e na cidade de Manaus- AM. As narrativas dos entrevistados apontaram inúmeros desafios, a constituição do movimento possibilitou alguns progressos, mas a passos lentos. A crescente insatisfação dessa população devido à grande onda de violências e crimes sofridos e a falta de representatividade no cenário político de Manaus-AM impulsionam



o movimento. O Conselho Estadual do Combate à Discriminação tem se consolidado como a instância que garante discussões e buscas de políticas públicas que visem garantir direitos e cidadania, além de enfatizar que os LGBT de Manaus-AM precisam estar unidos para fortalecer cada vez mais o movimento.

Dessa feita, a viagem por esses hemisférios, me possibilitou refletir e analisar que o público LGBT necessita de maior visibilidade não somente concernente à garantia de direitos por parte do Estado e das políticas públicas implementadas, mas por parte de toda população brasileira, em especial, da população manauara. As políticas públicas podem auxiliar na visibilidade e no respeito às diferenças – para que todos os respeitem; que os vejam como seres humanos; que esse respeito se inicie no seio familiar e que se amplie em todos os cenários sociais; que sejam vistos com igualdade; que se tornem protagonistas em todos os campos políticos e sociais; que suas militâncias possam obter respostas concretas e positivas; que possam sair da marginalização social e sejam incluídas em todos os ambientes como cidadãos atuantes; que não sofram mais quaisquer discriminações, nem violências, agressões e crimes pelo fato de serem LGBT; que possam conquistar seus sonhos à luz de um projeto emancipador de vida. Esses são alguns anseios que a pesquisa me proporcionou refletir e destacar.

O grande desafio é transformar essas utopias em efetivas políticas de Estado, na formulação e implementação de diretrizes e ações voltadas para a defesa dos direitos LGBT, em especial após o Governo Bolsonaro. Entretanto, é importante destacar que o campo das políticas públicas é constituído por disputas e, mesmo num cenário adverso, é possível obter algumas vitórias como a Lei contra a homofobia, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2019.

Notas

¹ Graduando do Curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, bolsista de iniciação Científica pelo CNPq

² Professora do Curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Referências Bibliográficas

Acchini, Regina. 'Sopa de Letrinha'? Movimento Homossexual e Produção de Identidades Coletivas Nos Anos 90: Um Estudo a Partir da Cidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado pelo Departamento de Antropologia Social do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. 2002.



Caetano, Marcio; Fernandes, Mariasa; Green, James N; Guinalha, Renan. História do Movimento LGBT no Brasil. São Paulo: ed. Alameda, 2018.

Grupo Gay Da Bahia. O que é o GGB (nossa história). Disponível em ww.ggb.org.br. Acesso em: 05/05/2017

Green, James Nylor. Além do carnaval. A Homossexualidade Masculina no Brasil do Século XX. Editora UNESP. São Paulo. 2000.

Gohn, Maria da Gloria. História dos Movimentos e Lutas Sociais: A Construção da Cidadania dos Brasileiros. Edições Layola. São Paulo, Brasil, 1995.

Macrae, Edward. Trabalho, Cultura e Cidadania: Movimentos sociais e os Direitos de Cidadania dos Homossexuais. São Paulo. Scritta, 1997. Disponível em: www.giesp.fflch.ufba.br. Acesso em 13/03/2017.

Mello, Luiz. Sobre planos, conferências e programas: por onde andam as políticas públicas para a população LGBT no Brasil. 2010. Disponível: <<https://bit.ly/35a0Mmj>>. Acesso em: 26/07/2017

Messeder, Pereira; Carlos, A. O impacto da aids, a afirmação da cultura gay e a emergência do debate e, torno do masculino – Fim da homossexualidade? In.: Rios, V.; Almeida, R.; Parker, C.; Pimenta, Terto Jr. (Orgs.). Homossexualidade: produção cultural, cidadania e saúde, Rio de Janeiro, ABI, 2004.

Monteiro, Claudia Guerra. O Direito a Ter Direitos. Revista do Centro de Ensino Superior (ESUC), 2002.

Pereira, Jefferson William. A Trajetória de Reivindicação do Movimento Social LGBT por Direitos e Políticas Públicas no Brasil e no Amazonas, 2009.

Santos, Gustavo Gomes da Costa. Estado, Projetos Políticos e Trajetórias Individuais: Um Estudo Com as Lideranças Homossexuais na Cidade de São Paulo.

Dissertação de Mestrado Apresentada ao Departamento de Ciências Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 2006.

Santos, Renato Caio Silva. As Primeiras Resposta a Epidemia de Aids no Brasil: Influências dos conceitos de gênero, masculinidade e dos movimentos sociais. Um artigo Baseado na Dissertação “Na escuridão do arco íris”: “A vivencia das relações afetivo sexual de jovens gays após o diagnóstico de HIV”, 2013.



Interpretando intérpretes: uma análise feminista das teorias clássicas dos movimentos sociais

Mariane Silva Reghim¹

Resumo

O principal objetivo deste trabalho é refletir e apontar para o caráter androcêntrico das teorias dos movimentos sociais pertencentes ao paradigma dos Novos Movimentos Sociais, buscando a existência ou não de aspectos objetivos de diferença no tratamento entre homens e mulheres no que se refere a essas/esses sujeitos enquanto objeto de pesquisa e enquanto possíveis interlocutoras/es mas também nos aspectos subjetivos e epistemológicos. Uma das dicotomias clássicas das ciências sociais é aquela que contrapõe mudança a permanência e, de maneira geral, a área dos movimentos sociais tem se dedicado a estudar sobre atores/práticas da mudança; no entanto, o que pretendo demonstrar é como a literatura canônica utilizada para interpretar esses atores ainda reproduzem uma estrutura androcêntrica na produção do conhecimento calcada na permanência. Partindo dos aportes da epistemologia feminista principalmente de Sandra Harding e Patricia Hill Collins pretendo analisar qualitativamente a obra “Nomads of the present” de Alberto Melucci, por ser uma obra já consolidada no tempo e, por isso, embasando também as interpretações dos movimentos sociais na América Latina e no Brasil. Os resultados parciais desta pesquisa vão no sentido de reverberar uma diferença no tratamento analítico e epistemológico entre homens e mulheres na qual persiste uma ideia universal e particular, sendo o primeiro atribuído aos homens e o segundo às mulheres ou ainda à relação entre sujeito e objeto no qual mulheres constantemente são reconhecidas enquanto objeto (movimento feminista) mas muito pouco enquanto interlocutoras cognitivas.

Palavras-chave

Androcêntrico; epistemologia feminista; Novos movimentos Sociais; Melucci

Introdução

Ainda que tenhamos várias definições, paradigmas e perspectivas, posso afirmar sem receio algum que o feminismo é um movimento social. Talvez devido a simplicidade dessa afirmação e sua aparente inocência é que escrever esse trabalho seja uma tarefa árdua, devido aos fatos de 1) este ser um trabalho sobre teoria dos movimentos sociais 2) ser um trabalho que se ancora na epistemologia feminista e 3) por não ser um trabalho



sobre o movimento feminista. Ou seja, o que pretendo fazer em sequência é analisar as teorias dos movimentos sociais, mais especificamente uma obra do paradigma dos Novos Movimentos Sociais, utilizando como referência o arcabouço teórico da epistemologia feminista, baseando principalmente no conceito/ideia que a ciência se desenvolveu e se desenvolve sob uma perspectiva androcêntrica.

Um outro fator que acrescenta complexidade à questão é o fato de aqui eu diferenciar/separar o movimento feminista da epistemologia feminista, sendo que ambas se desenvolvem de maneira interligada, relacionada e inclusive, muitas vezes, são práticas e elaborações de uma mesma pessoa. Quer dizer, ao me propor usar determinada epistemologia já se sabe, de antemão, que me posiciono enquanto feminista, e que o próprio uso dessa bibliografia pode ser encarada como uma militância o que dificulta, portanto, separar ambas as coisas. Essa separação, no entanto, é proposital e justificável, como pretendo apresentar. Uma das características marcantes da ciência ocidental moderna, inclusive nas ciências humanas e sociais, está baseada na separação dicotômica entre sujeito e objeto, na qual o primeiro, cerne de racionalidade, reflexividade e cognição é capaz de elaborar conhecimento sobre o segundo, que assume um viés de passividade, responsividade e inércia. No que se refere aos estudos dos Movimentos Sociais isso pode ser compreendido, por exemplo, em pesquisas que consideram movimentos sociais ou ações coletivas enquanto objeto de estudos, com fins em si mesmos e fonte de reflexão para o autor, que assume o papel de refletir e analisar o movimento. O feminismo, enquanto movimento, tem servido amplamente para esse fim: o de ser objeto de pesquisa. No entanto, o movimento feminista não ocupará aqui o espaço de objeto a ser pesquisado, pelo contrário, aqui as reflexões advindas desses movimentos, a epistemologia feminista, será sujeito de saber.

O trabalho será dividido em quatro partes. Na primeira, apresento como podemos entender os estudos dos movimentos sociais, apresentando os principais paradigmas de acordo com Alonso (2009), Gohn (1997), Cohen & Arato (1994) e Calhoun (1993), bem como uma crítica da interpretação usual, elaborada por Cohen & Arato (1994) e Calhoun (1993). Na segunda, apresento as principais características da epistemologia feminista de acordo com as autoras Sandra Harding (1986) e Patricia Hill Collins (2019). No terceiro, pretendo abordar a crítica feminista dos estudos dos movimentos sociais, me baseando principalmente nas elaborações de Myra Ferree & David Merrill (2000) e Verta Taylor (1998). Por fim, adentro especificamente nas análises do livro de Melucci.



Teorias dos movimentos sociais

Comumente a maneira como explicamos o desenvolvimento dos estudos dos Movimentos Sociais é através da divisão entre o paradigma clássico e o paradigma dos Novos Movimentos Sociais. Ambos os paradigmas são compostos por autores e vertentes que podem e divergem entre si, mas que, além disso, possuem um conjunto mínimo de referências e abordagens que permitem tais agrupamentos. Tal divisão é justificada por dois principais motivos: 1) localização geográfica (as interpretações elaboradas nos Estados Unidos e as elaboradas na Europa) e 2) as características mais explícitas dos movimentos (de trabalhadores/classe ou os identitários), ambos aliados ao momento histórico em que foram desenvolvidos. Por ser sistemático e de fácil compreensão, além de amplamente aceita, os matizes no qual amparam tal interpretação permanecem ao longo do tempo, mesmo que algumas dessas bases tenham sido criticadas e apontadas como tendenciosas ou mesmo falaciosas.

A fim de não repetir análises que têm sido feitas exaustivamente (Alonso, 2009, Gohn, 1997, Cohen, Arato, 1994), vou me focar aqui no que é considerado o paradigma dos Novos Movimentos Sociais, visto que Melucci (1989) pertence a esse conjunto. De maneira geral a especificidade dos Novos Movimentos Sociais diz respeito ao elemento identitário que assume suas lutas, organizações e ações. Elemento esse que também traz em si o principal aspecto de críticas atribuída a essa novidade. Explico melhor.

As teorias dos Novos Movimentos Sociais surgem em sintonia e em relação aos movimentos que ganham maior visibilidade no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 na Europa, que apresentam as ditas pautas identitárias, que seria a sua novidade em relação aos movimentos anteriores que se organizariam, principalmente, a partir do mundo do trabalho - organizações sindicais e movimentos trabalhistas cuja classe é o cerne principal de organização, lutas e ações. Ao contrário da classe, que na teoria assume um caráter universal e geral, visto que permeia a sociedade como um todo e que organiza para além de outras vivências, as identidades passam a ser interpretadas enquanto elementos específicos e localizados, visto que “repartem” e separam a classe trabalhadora. Gênero, raça e sexualidade são as identidades de maior relevância, mas não as únicas.

No entanto, o que autora e autores como Cohen & Arato (1994) e Calhoun (1993) têm problematizado é sobre se há novidade de fato nesses movimentos, o que em ambas as obras, apresenta resposta negativa. De acordo com essas interpretações, o que contrapõe os Novos Movimentos Sociais seria o seu eixo de mobilização (identidade e



nãoclasse), mas também o modo de organização, na qual os Novos Movimentos Sociais assumem uma postura, pelo menos a princípio, menos formal, hierarquizada e centralizada, ao contrário dos sindicatos, por exemplo. No entanto o que essa e esses autores apresentam é que esses elementos não são tão novos assim, visto que já estavam presentes também nos movimentos pré-1960, bem como em movimentos trabalhistas.

Cohen e Arato (1994), nos apresentam outros elementos de reflexão, uma vez que o foco está em desmistificar a dualidade imperante na teoria social, que insiste em separar elementos como racionalidade/ irracionalidade, emoção/ razão e universalidade/ especificidade. Usando o movimento feminista aqui enquanto exemplo, mas também enquanto interlocutor, nos apresentam como os ditos novos movimentos sociais identitários assumem posturas que fazem parte também dos movimentos de classe, sem, no entanto, se fechar a elas. Ou seja, mesmo que tenha um plano no qual a identidade é sim privilegiada enquanto eixo de luta, isso não significa que questões universais não estejam sendo travadas, bem como não reduz o movimento a apenas uma característica.

No que se refere ao meu propósito aqui, as reflexões apresentadas por Cohen e Arato (1994) convergem diretamente com as apostas e pressupostos das epistemólogas feministas, principalmente no sentido de tentar romper com um pensamento dual ancorado, principalmente, na diferença entre os gêneros e, em relação a isso, a partir das teorias e interpretações, mirar análises que objetivem também diminuir hierarquias e assimetrias que são constitutivas teórica, epistemológica e metodologicamente.

Epistemologia feminista

O presente trabalho parte do pressuposto que existem desigualdades de gênero que estruturam a sociedade e, sendo assim, pretende entender essas desigualdades no que se refere à produção de conhecimento científico. Para isso é crucial considerar a produção de conhecimento enquanto um artefato social e cultural, inserido na sociedade e que portanto (re)produz questões inerentes à sua estrutura, tais como gênero, raça, e localização geo espacial (Merton, 1973, Collins, 2019).

A desigualdade de gênero, bem como demais desigualdades, pode incidir de diversas formas na produção de conhecimento. O desenvolvimento de epistemologias outras têm seguido o caminho de identificar as raízes e normas do conhecimento tido como moderno ocidental para então romper com estruturas que até então tem excluído uma vasta gama



de possibilidade de outras maneiras de conhecer ou até mesmo re-conhecer aquilo que já se conhece.

A epistemologia sem adjetivos é um campo principalmente da filosofia, cuja pergunta básica é “como podemos conhecer?” e cujo acúmulo precede a bibliografia aqui tratada. A epistemologia feminista dialoga em grande parte com referências dessa área, seja para subsidiar seus posicionamentos, seja para discordar ou generificar suas conclusões. Por questões de espaço, não vou abarcar o debate histórico, e vou direto ao ponto, para a definição de epistemologia feminista de Anderson, para a qual “o projeto da epistemologia feminista visa defender as práticas científicas feministas, que incorporam o compromisso com a libertação das mulheres e a igualdade social e política de todas as pessoas” (Anderson, 1995, p. 51), ou seja, um conhecimento com compromisso intelectual comprometido com uma causa.

A epistemologia feminista, ou epistemologias feministas, caso queira ser mais precisa, vai no encontro de ambos os caminhos, ou seja, propõe novas ferramentas ou perspectivas de análise, bem como proporciona a possibilidade em re-analisar e re-avaliar aquilo que já se tem conhecimento. Mais uma vez feminismo e ciência se encontram, uma vez que o movimento feminista também apresenta essas características, ou seja, ao mesmo tempo que pretende desconstruir e apontar novos rumos menos desiguais, busca contar outras versões da História, na qual mulheres não sejam apenas acessórios ou detalhes, mas também protagonistas.

Gênero não é, no entanto, o único marcador social que interfere no modo de produção e análise científica. Localização geoespacial e raça também são alicerces e lugares sociais que de certa maneira determinam visões, falas e escutas. O pensamento decolonial (Mendoza, 2010) bem como o pensamento feminista negro (Collins, 2019) são chaves analíticas que permitem compreender a ciência a partir outros lugares e identidades. Ainda mais importante que entender cada uma dessas epistemologias de maneira separada, minha proposta se ancora numa interpretação que leva em conta todas elas ao mesmo tempo, ou seja, é feminista, antirracista e anticolonial.

No que se refere à desigualdade de gênero nas produções científicas, podemos indicar sua presença de três maneiras: estrutural, simbólica e individual (Harding, 1986). A primeira se refere aos aspectos objetivos e estruturantes da produção científica, que vai desde a quantidade de mulheres presentes nos laboratórios e departamentos universitários até a quantidade de mulheres que são reconhecidas, legitimadas e citadas em artigos e livros científicos. O segundo aspecto se refere a questões que podem ser



encontradas, principalmente, no modo como as mulheres aparecem nas análises e teorias que são elaboradas, cuja a sustentabilidade seja menos através de critérios objetivos e mais por hábito, tradição ou simbolismo. Ambos aspectos podem ser considerados de maneira coletiva e abrangente, no entanto há um terceiro aspecto que é referente ao modo como isso se dá no plano individual. Ainda que os três elementos apareçam e existam de maneira paralela, para os propósitos do presente trabalho focarei no aspecto simbólico, principalmente no que se refere ao modo como as mulheres aparecem ou deixam de aparecer.

No que se refere ao caráter simbólico de gênero e o modo como esse pode ser estudado através da epistemologia feminista, vou me ater aqui ao uso conceitual do androcentrismo, ou seja, ao fato de que a ciência girou, em boa parte, em torno das experiências e produções masculinas. O homem europeu ao centro serve como contraponto neutro ao diferente, ao específico e ao outro, aqui exemplificados através dos movimentos feministas, das mulheres que participam em outros movimentos sociais que não os feministas e dos exemplos localizados fora da Europa

A pesquisa feminista dos movimentos sociais

A relação entre a teoria dos movimentos sociais e o feminismo pode ser entendida tanto como uma via de mão dupla ou como uma via de mão de única, a depender do caso. O fato de querer estudar movimentos que possuem as suas próprias matrizes intelectuais e sua praxis aparece para a/o pesquisador/a de modo a acentuar questões que sempre estão presentes nas pesquisas sociais. O distanciamento, a relação com o “objeto”, a relação da autoria são algumas delas; atrelado a isso temas clássicos na sociologia também podem atormentar a/o pesquisador/a, como a objetividade, a subjetividade e etc. O que estou querendo dizer é que ao pesquisar movimentos sociais, cujas pautas sociais, políticas e identitárias podem também ser de quem as produz, o caráter das respostas encontradas costumam ser questionadas.

Mais que isso, um ponto importante de conexão entre a epistemologia feminista e o estudo dos movimentos sociais que quero aqui enfatizar é o lugar de fala da e sobre a política. Tanto as epistemólogas feministas quanto teóricos dos movimentos sociais estão lidando, ao menos teoricamente, com acontecimentos que possuem dimensões políticas, mas que também possuem dimensões intelectuais, se aceitarmos que os movimentos sociais também produzem reflexão e conhecimento acerca de suas estratégias, lutas e causas. A junção disso, que pretendo abordar nesse tópico, se refere



tanto a questões metodológicas quanto conceituais que são resultado da reflexão generificada da pesquisa dos movimentos sociais.

Para ter uma ideia do que estou dizendo gostaria de apontar o debate realizado por Ferree & Merrill (2000) sobre o conceito de Frame, usualmente utilizado/comentado nas pesquisas de movimentos sociais. O artigo faz parte de um projeto maior, uma coletânea destinada a discutir a relação sobre movimentos sociais e emoção, cujo escopo foge dos propósitos deste trabalho, mas cuja temática está presente no decorrer da argumentação.

Se, por um lado, a associação entre emoção-feminino costuma ser o reflexo do par racional-masculino, esta discussão busca trazer a emoção para o centro da política e dos movimentos sociais, tanto em sua prática quanto na teoria. Assim, mais uma vez, epistemologia feminista e a pesquisa feminista dos movimentos sociais coadunam em seus pressupostos e propostas de abranger o estudo dos movimentos sociais.

O foco do artigo, no entanto, se refere ao conceito de frame (enquadramento/ moldura), bastante utilizado nas teorias dos movimentos sociais (Ferree & Merrill, 2000) principalmente aquelas que se baseiam nos paradigmas norte-americanos, e que a princípio não estão diretamente relacionados com os autores aqui analisados, mas que serve como fonte e referência para a análise presente e reflexões futuras. Em poucas palavras, “O processo de enquadramento é o mecanismo pelo qual discursos, ideologias equadros estão todos conectados.” (p. 456), sendo o discurso a base desta pirâmide,

o conceito de "moldura" sofre limitações de gênero na maneira como a teoria dos movimentos sociais se desenvolveu. A análise de enquadramento desenvolveu-se a partir de tradições psicológicas sociais que modelam a cognição como "fria", usando o observador parcial e desapaixonado como o ator padrão (Ferree & Merrill, 2000, p. 456)

Essa cognição fria pode ser aqui entendida no bojo da discussão dos pares dicotômicos anteriormente apresentados, ou seja, aquela que coloca a racionalização no centro da ação e organização política, características tidas como masculinas e, por isso, deixa escapar a cognição “quente”, que é aquela imbuída de emoção e paixão, características tidas como femininas. Desse modo, aqui muito resumido, “estudar ideias de movimento como se elas pudessem ser isoladas do calor refinado do engajamento levam os pesquisadores do movimento social a negligenciar os efeitos que a participação em eventos de protesto tem sobre a consciência, bem como subestimar a importância de descobrir onde e como a paixão surge” (Ferree & Merrill, p. 457). O que está para jogo,



portanto, é apontar como essa separação, juntamente a outras, como público e privado, objetivo e subjetivo, estão no cerne do que será estudado, analisado e enquadrado como movimento social, ação política, bem como o que será caracterizado como movimento social e movimentos de mulheres bem como quem estuda e produz conhecimento sobre o quê.

Endossando o argumento, Verta Taylor (1998) elabora em seu texto “Feminist Methodology in Social Movements Research”, a partir do estudo do o movimento de auto- ajuda da depressão pós-parto as cinco características que muitos escritores concordariam [que] são o núcleo de uma metodologia feminista distinta: foco na desigualdade de gênero e gênero, foco nas experiências cotidianas das mulheres, reflexividade como fonte de insight, ênfase nos métodos participativos e política ou ação componente (Taylor, 1998, p. 360)

No trabalho citado a autora destrincha cada uma dessas características, elaborando de modo mais profundo como elas se desenvolvem e se relacionam umas com as outras, bemcomo fazendo conexões com os temas aqui já discutidos como a relação entre sujeito e objeto, objetividade na pesquisa e etc. Ao que nos interessa é pensar de que modo podemos relacionar epistemologia feminista, metodologia feminista e a pesquisa e teoria dos movimentos sociais.

Conforme apresentado anteriormente, o modo que encontrei de lidar com essas questões na prática é analisar a obra de um importante teórico, que é referência nos estudos dos movimentos sociais. Tema esse do próximo tópico.

Alberto Melucci em análise

A proposta em focar a análise em apenas um autor se circunscreve a uma limitação de espaço, por se tratar de um artigo, mas também em questões de logística e de possibilidades reais. Antes de entrar especificamente no autor penso que seja importante fazer algumas ressalvas.

Primeiro que não proponho excluir ou desmerecer tudo que foi elaborado pelo autorem questão, inclusive por reconhecer a limitação em olhar para apenas um exemplar dentro de uma vasta produção durante suas vidas. Assim, tenho consciência que a obra completado autor não se resume a apenas uma publicação e a análise aqui presente é referente exclusivamente a ela. Em segundo gostaria de apontar um limite do idioma, ou seja, a obra aqui analisada do Melucci foi inglês, que não é meu primeiro idioma e portanto, passou por processos de tradução.



Sendo assim, é importante reiterar que a análise fica circunscrita à obra em questão, em seus próprios méritos e deméritos, não cabendo aqui e nem a mim, julgar a relevância do conjunto das obras, inclusive desta, no que se refere ao campo de estudos em movimentos sociais. Inclusive, por isso tomo como dada a relevância de tal autor, bem como seu reconhecimento e importância da consolidação e desenvolvimento dos estudos dos movimentos sociais e cuja minha análise não se refere ao caráter conceitual e analítico contido na obra, senão de que modo as relações de gênero, mulheres e feminismo nela aparecem.

O livro *Nomads of the presente - social movements and individual needs in contemporary society* tem a publicação datada de 1989. O livro é dividido em quatro partes, sendo a última o Apêndice que não será aqui abordado. O capítulo 9, presente na parte 3, também está excluído da análise, por se configurar como uma entrevista dada por Melucci, o que foge da proposta aqui apresentada. Sendo assim, será parte da análise os capítulos 1, 2, 3 e 4, que compõem a parte I – “Towards a Theory of Collective Action”, os capítulos 5, 6 e 7 que compõem a parte II – “Complex Societies and Everyday Life” e o capítulo 8 presente na parte III - Rethinking Democracy.

O principal objetivo do autor nesse livro é propor categorias de análise que sejam capazes de explicar os movimentos sociais contemporâneos (décadas de 1970 e 1980), levando em consideração as principais características da sociedade contemporânea complexa. Seu argumento parte daquilo que ele identifica como falha dos dois principais paradigmas utilizados até então: o paradigma “comportamental”, no qual prevalece a observação de ação sem atores, como no caso da imitação ou irracionalidade, por exemplo; e por outro o paradigma marxista, que ao focar nas condições materialistas, resulta em uma análise de atores sem ação.

A despeito das diferenças, essas abordagens tradicionais, que continuam a ser influentes, compartilham certas suposições epistemológicas. O fenômeno coletivo - seja pânico, movimento social ou processo revolucionário – é tratado como um dado empírico unificado que, supostamente, pode ser percebido e interpretado pelos observadores (Melucci, 1989, p. 18)

Discordando dessa premissa epistemológica, o autor segue buscando explicações e argumentos para defender uma visão dos movimentos, dos atores e das ações nas suas heterogeneidades, cuja explicação se ancora, principalmente, nas mudanças pelas quais as sociedades contemporâneas passaram. O foco no mundo da vida está presente no transcorrer do texto – ao ponderar continuidades e rupturas históricas, o



autor busca nos elementos cotidianos a explicação para o que seriam e como funcionam as ações coletivas. A individualização e a politização do dia a dia são aprofundados, sempre atentando para a dinâmica da regulação e autonomia, indivíduo e sociedade, interior e exterior. A importância da informação e do conhecimento também delineiam o argumento, principalmente por esse tornar uma importante ferramenta para todos os elementos até então apresentados.

No que se refere aos elementos relacionados à epistemologia feminista – ou crítica feminista da ciência – vou abordar três tópicos: as mulheres enquanto objetos e não enquanto sujeitas de conhecimento; a construção dos conceitos de ação coletiva e identidade coletiva e, por fim, um aspecto que relaciona gênero e dinâmicas geopolíticas, atentando para o caráter eurocêntrico em que se baseia a presente obra.

Como um elemento objetivo, gostaria de começar ressaltando que o autor se preocupa em incluir os pronomes femininos na sua obra, de modo que o uso naturalizado da linguagem toda no masculino que usualmente se refere a homens e mulheres é aqui rompido. Além disso, no que se refere à pesquisa empírica, o coletivo feminista é apresentado na sua heterogeneidade, apresentando as suas principais pautas a partir das falas das militantes e não apenas do olhar do pesquisador sobre elas. Além disso, mobiliza-se referência feminina/feminista para aprofundar nos temas que se referem à luta das mulheres. No entanto, como de praxe, mobiliza-se mulheres apenas para se falar de mulheres. No decorrer do texto, os referenciais são majoritariamente masculinos – tanto ao falar especificamente de teorias, quanto ao descrever os outros movimentos analisados. Considera-se as mulheres enquanto objeto de pesquisa – o movimento feminista/de mulheres é uma referência mundialmente conhecida de movimento social e ação coletiva – portanto não é prazível de ficar fora da análise de um livro que se propõe a estudar os movimentos contemporâneos, no entanto, a referência fica circunscrita ao movimento em si, e mulheres são referenciadas apenas para falar do feminismo e do movimento de mulheres. Compreendo aqui que o feminismo, enquanto movimento social, também possui uma vasta gama de mulheres acadêmicas e que produzem sobre movimentos sociais. Como já foi dito anteriormente, é como se existisse uma teoria dos movimentos sociais de maneira geral, que abarcaria todos os movimentos – que está no nível da teoria e das construções de categorias analíticas gerais – e teria o campo do movimento feminista. Esse tipo de barreira acaba impedindo que mulheres sejam lidas e citadas em obras sobre teorias dos movimentos sociais, por considerarem que suas produções são específicas.



Além disso, há um outro fator. Ao se referir ao movimento feminista, a partir da pesquisa realizada com militantes, o autor enfatiza, pelo menos duas vezes, uma demanda pela diferença entre as mulheres, como “também alega a importância da diferença, a necessidade de códigos alternativos que exigem reconhecimento. As mulheres levantam a questão da diferença para toda a sociedade e pedem que todos possam ser reconhecidos como diferentes” (Melucci, 1989, p. 55) e “as mulheres também pedem que o direito seja reconhecido como diferente - mesmo que seja difícil evitar usar o idioma dominante para definir esse direito.” (Melucci, 1989, p. 62). A questão aqui embutida pode ser explicitada de duas maneiras. Ele reforça que o movimento de mulheres defende a diferença, mas sem usar uma referência feminista que explique o porquê disso. Ou seja, diferença em que nível, em relação a quem/que e com qual objetivo. No nível epistemológico, é cabível perguntar não são homens também diferentes? Não existem diferenças também nos outros movimentos? Qual a construção da diferença entre os gêneros e dentro do mesmo gênero? Qual o gênero da linguagem, e como isso pode impedir mulheres e pessoas de outros gêneros se comunicarem?

Em seguida, partindo das premissas já apontadas, o autor mobiliza as ideias de ação coletiva e identidade coletiva para explicar de que modo os movimentos sociais podem se agrupar, bem como para apontar as dimensões analisáveis dos movimentos sociais, sendo elas que os fenômenos coletivos podem se dar por solidariedade ou agrupamento e que os fenômenos coletivos envolvem conflitos e também consenso.

Nas palavras do autor, a identidade coletiva é uma definição interativa e compartilhada, produzida por vários indivíduos interativos que estão preocupados com as orientações de suas ações, bem como com o campo de oportunidades e restrições nas quais seus atos ocorrem. O processo de construção, manutenção e alteração de uma identidade coletiva fornece a base para os atores moldarem suas expectativas e calcularem os custos e benefícios de sua ação. A formação coletiva da identidade é um processo delicado e requer investimentos contínuos (Melucci, 1989, p. 34)

A ação coletiva, calcada a partir da ideia de identidade coletiva, enfatiza o tempo todo, desde sua concepção até a elaboração de seu modelo analítico, a importância da coletividade, das redes, da comunidade, ou seja, da vivência em conjunto. Esse ponto é importante uma vez que coloca de modo abstrato o que sabemos ser uma experiência que varia de acordo com o gênero, e também com a raça, sexualidade, capacidades motoras e etc. Ou seja, quem são essas pessoas envolvidas em redes de mobilização? De que maneira o gênero influencia na possibilidade em ser reconhecida enquanto um/a



igual? A motivação para participar não está dada. O que pode bastar para um pode não bastar para outra, e aqui digo para além de questões de ideologia ou políticas, uma vez que essas podem mobilizar ambos os gêneros (desigualdades sociais, insatisfação com o sistema e etc), mas quais as condições concretas para uma mãe com criança pequena participar de uma ação coletiva que não está apta a recebê-la com sua cria?

Em sua definição de sistema de ação multipolar, são enfatizados três elementos que contribuirão na formação de um coletivo mais ou menos estável, sendo eles “os objetivos de sua ação; os meios a serem utilizados; e o ambiente em que sua ação ocorre” (Melucci, p.1989, p.26). Ainda que o autor tente romper com os paradigmas anteriores, buscando entender a ação coletiva a partir de relações interpessoais que podem assumir diversos caminhos e objetivos, ainda falta aqui a explicitação e a compreensão que boa parte desse “como agir”, “qual ação” e a importância do meio são relativas ao gênero. Por exemplo, se formos considerar que o acesso aos ambientes pode ser excludente é possível assumir de antemão que mulheres que consigam fazer parte de um “nós” em um espaço como a política partidária institucional? Ainda, é a rua um ambiente aberto para a presença de mulheres, ao ponto de agirem conforme seus objetivos? A disputa pelos meios a serem utilizados está considerada de antemão, o que faz sentido, mas como esses meios estão distribuídos entre os gêneros? E como essas desigualdades de gênero afetam o modo de construção de uma identidade e de uma ação coletiva?

Aliado a isso, o autor, estabelece em relação a ação e a identidade coletiva, um processo “nos sistemas modernos complexos, [em que] os atores sociais individuais têm chance de se tornarem indivíduos, isto é, de se definirem como sujeitos distintos de ação, independentemente de sua participação no grupo, situação ou herança.”, ou seja, a chance que temos de nos tornar indivíduos e poder nos definir como sujeitos distintos do grupo. Simone de Beauvoir, define a mulher como o *outro* do homem, ou seja, a própria definição de quem somos é a partir daquele que não precisa se definir, ou seja, os homens. De acordo com isso poderíamos então dizer que mulheres não são indivíduos? Isso de maneira mais abstrata. De maneira mais concreta. Quantas de nós ainda somos definidas de acordo com as nossas famílias, origens e heranças? Quem tem a liberdade de poder se definir de fato? Uma vez que as pessoas não ocupam as mesmas profissões, que há um marcador de raça fundamental para entender classe, de quais indivíduos ele está falando?



Por fim, gostaria de aprofundar no aspecto geopolítico da epistemologia feminista. Ao apontar o modo como o gênero influencia no modo de se fazer ciência, bem como qual tipo de produção é valorizada e legitimada, o aspecto da nacionalidade também está presente no debate feminista decolonial. Ou seja, de que modo a hegemonia europeia e norte americana incidem na produção acadêmica e intelectual contemporânea. No que se refere essa obra, gostaria de apontar dois aspectos em que isso é sobressalente. Um, no qual o eurocentrismo está evidente e outro em que gênero e organização geopolítica estão relacionados.

O primeiro se refere ao fato de que o autor usa sua pesquisa com três movimentos em Milão-Itália entre 1970 e 1980 para construir uma análise dos movimentos nas sociedades contemporâneas complexas. Parte-se de movimentos circunscritos a um espaço-tempo e daí extrapola-se para todo um globo terrestre. Um dos aspectos que sustenta a ideia do eurocentrismo está baseada nessa relação entre universal e específico, na qual o geral, o universal é aquilo que explica a tudo, enquanto o específico é sempre o outro – que nesse caso pode ser as mulheres ou também os movimentos e os modos de organização nas sociedades “periférica”. O uso dos termos é uma evidência quanto a isso. Sociedades complexas, esse é o termo utilizado pelo autor para se referir à Europa, em contraponto a outros continentes. Depois ele usa os termos menos etnocêntricos, mas como uso desse termo fica evidente que toda a sua obra se refere apenas ao continente europeu (talvez Estados Unidos também) o que não é um problema, admitir que o trabalho tem um certo alcance é o que esperamos. A questão é que ele faz esse trabalho e cria categorias que, supostamente, poderão ser utilizados para explicar a cultura contemporânea.

O segundo fator está no modo como essa construção eurocêntrica pode aparecer. Para isso, farei uma citação um pouco mais longa de um trecho da obra em análise. O trecho foi extraído do capítulo 5 “Signs of everyday life”, no qual o autor está apontando as mudanças cotidianas na vida das pessoas.

Mudanças nas esferas sexual e reprodutiva certamente estão entre os fatores que contribuem para a queda da taxa de natalidade em todas as sociedades complexas, nas quais a taxa de natalidade média é agora de 1,5 filho por mulher, com pequenas variações de país para país. Em termos demográficos, dois filhos por mulher representam um crescimento populacional de zero, o que significa que a diminuição da população dos países 'centrais' se tornará mais pronunciada, enquanto as populações dos países 'periféricos' continuarão a aumentar rapidamente, exercendo assim uma drástica



pressões nas áreas mais privilegiadas. (Prevê-se que, no final deste século, os países do Terceiro Mundo representem 80% da população mundial; dentro de cinquenta anos, os habitantes dos Estados Unidos de origem africana, asiática e sul-americana excederão os de origem europeia). Essa enorme transformação envolverá grandes mudanças e conflitos entre culturas e regiões, que não podem deixar de modificar as relações entre Estados no nível planetário e as relações étnicas em vários países (Melucci, 1989 p. 115)

Argumentação gira em torno de que o aumento da população periférica significa o aumento da pressão nas áreas mais privilegiadas. Ele coloca essa diferença da taxa de natalidade como um contra efeito negativo; um risco. Ao fim, a população latino americana, asiática e africana é um risco para a hegemonia europeia.

Além do caráter violento implícito no argumento, vale ressaltar que esse tipo de raciocínio serve para justificar e legitimar técnicas de controle de nascimento forçadas em mulheres de países periféricos como já apontava Eduardo Galeano:

As missões norte americanas esterilizam maciçamente mulheres e semeiam pílulas, diafragmas, DIUs, preservativos e almanaques marcados, mas colhem crianças (...) Tornou-se célebre a frase de Lyndon Johnson: 'Cinco dólares investidos contra o crescimento da população são mais eficazes do que cem dólares investidos no desenvolvimento econômico' (...) Platão e Aristóteles haviam-se ocupado do tema antes de Malthus e McNamara; contudo, em nossos tempos, toda esta ofensiva universal cumpre uma função bem definida: propõe-se justificar a desigual distribuição de renda entre os países e entre as classes sociais, convencer aos pobres que a pobreza é resultado dos filhos que não se evitam e pôr um dique ao avanço da fúria das massas em movimento e rebelião. Os dispositivos intra uterinos competem com as bombas e as metralhadoras (Galeano, 1983, p. 16-7)

Conclusão

A epistemologia feminista, bem como o movimento feminista, há muito tempo vem questionando e apontando para lacunas constitutivas do pensamento científico no que se refere à exclusão de gênero e ao seu caráter eurocêntrico e androcêntrico. Penso que esses apontamentos servem antes para pensar em como transformar o conhecimento científico em um conhecimento que seja cada vez mais inclusivo e democrático do que para questionar o conhecimento científico em si.



Tendo isso em mente, a proposta aqui presente, em analisar um livro de um autor, tem também suas limitações e seu alcance. *Nomads of the present* é, assim como todo e qualquer conhecimento, restrito ao seu tempo, assim como seu autor. Seria incoerente cobrar um posicionamento feminista e decolonial de um homem europeu, e por isso, penso, a partir e em conjunto, das teóricas feministas que essas críticas devem extrapolar cada vez mais o “nicho” feminista e estar presente aos debates das teorias dos movimentos sociais, mas também das outras áreas da sociologia e das ciências sociais.

Apontar o modo como as mulheres e o movimento feminista é retratado na obra, como generificar a construção de conceitos e apontar o caráter eurocêntrico e androcêntrico que pode servir para justificar violências contra mulheres em países do sul global, faz parte da agenda de pesquisa feminista.

Por fim, gostaria de apontar que ciência, conhecimento e poder estão intrinsecamente relacionados e, portanto, podem e devem ser pensados de maneira conjunta. Questionar cânones é aqui um trabalho científico e político. Por fim, não só as mulheres e latino américas/os possuem identidade e daí a importância em atribuir gênero e continente à produção intelectual que segue sendo referência para os fenômenos sociais que acontecem nessa parte do hemisfério.

Notas

¹ marianesreghim@gmail.com

Referências bibliográficas

Alonso, A. (2009). As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. *Lua Nova*, São Paulo, 76: 49-86.

Anderson, E. (1995). *Feminist Epistemology: An Interpretation and a Defense*. *Hypatia*, 10(3): 50-84

Calhoun, C. (1993). "New Social Movements" of the Early Nineteenth Century. *Social Science History*, 17 (3): 385-427.

Cohen, J.L & Arato, A. (1994) *Civil society and political theory*. MIT.

Collins, P. H. (2019). *Pensamento feminista negro*. São Paulo: Boitempo.

Ferree, M. M. & Merrill, D. A. (2000). Hot Movements, Cold Cognition: Thinking about Social Movements in Gendered Frames. *Contemporary Sociology*, 29 (3): 454-462

Galeano, E. (1983). *As veias abertas da América Latina*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.



Gohn, M. G. (1997). Teoria dos movimentos sociais paradigmas Clássicos e contemporâneos. Edições Loyola: São Paulo.

Harding, S. (1986) The Science question in feminism. New York: Cornell University

Melucci, A. (1989). Nomads of the present: social movements and individual needs in contemporary society.

Mendoza, B. (2010) La epistemología del sur, la colonialidade del género y el feminismo latinoamericano. In: Yuderky Espinosa (coord.), Aproximaciones críticas a las prácticas teórico-políticas del feminismo latinoamericano. Vol. I, p. 19-36. Buenos Aires: En la frontera.

Merton, R. (1973) The Sociology of Science Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: University of Chicago Press

Taylor, V. (1998). Feminist Methodology in Social Movements Research. Qualitative Sociology, 21 (4): 357-379



Línea Temática 7.

**Redes transnacionales,
escalas y alternativas regionales**



“Territorio” como concepto clave en la movilización y organización social: Análisis de la concepción territorial en experiencias en la provincia de Entre Ríos.

Marcelo D Amico
César Arístides Pibernus
Diego Roldán

Resumen

La ponencia analiza la concepción territorial de cinco experiencias de movilización y organización social con residencia en la provincia argentina de Entre Ríos, pero que maduran posiciones críticas en sus respectivos programas –más o menos explícitas, dependiendo el caso– respecto a las tradicionales geopolíticas estadocéntricas.

“Territorio” no es bien exclusivo ni de estas expresiones neoratzelianas, ni tampoco de las neodarwinistas que parecen tomar nuevos bríos que rescatan el recalcitrante “imperativo territorial”. Tampoco se restringen al uso dentro la geografía como disciplina, ni dentro del ámbito académico, es un concepto central en todo análisis social y un punto central en la agenda de los movimientos sociales en la región, como también parte fundamental de la disputa.

Las experiencias elegidas en esta oportunidad constituyen un corpus variado en cuanto a su naturaleza, intensidad y objetivos estrictos, aunque todas se plantan desde concepciones territoriales críticas que desacoplan el concepto “territorio” de las restricciones impuestas por las fronteras estatales. Analizamos en ellas sus referencias al proceso de construcción territorial en la región, a las tensiones que enfrentan los estados territoriales en sus respectivas temáticas, y, por último, a la necesidad de superar tanto la concepción geopolítica tradicional como las regulaciones limítrofes estatales.

Palabras clave

Territorialidad; Geopolíticas críticas; movilización; Organización social-Entre Ríos.

Producción social del espacio, construcción de territorialidades y territorios

La definición de territorialidad propuesta por Robert Sack (1986) resulta una excelente base para nuestro trabajo, en tanto podemos enmarcarlo en la problemática de la producción social del espacio, incorporar algunos matices, hacer minúsculas salvedades y situarlo en el problema específico que nos convoca.



Entender la territorialidad como “intento por parte de un individuo o grupo de afectar, influir, o controlar a las personas, fenómenos y relaciones, delimitando y reafirmar el control sobre un área geográfica” (1986: 26) afina nuestra perspectiva sobre la producción de espacio a través de la construcción territorial, entendiéndola como parte de un proceso dinámico y vinculado a las condiciones concretas en las que maduró. Más valor aún cobra este posicionamiento cuando Sack amplía el concepto desvinculándolo tanto de la tradición biologicista –que la entiende muy mayoritariamente como producto del instinto agresivo natural y determinante– como de la concepción estadocéntrica que confunde “territorio” con “suelo”. La definición propuesta menciona agentes humanos, pero no los ciñe a instituciones ni equipara “política” con “estado moderno”. Sí vincula el término a “poder”, pero para luego abordar escalas que abarquen desde una habitación hasta la arena internacional (1986: 56). Definirla al principio como “attempt” a secas hubiese implicado un gran riesgo para la propuesta, pues reducía la precisión de la definición, pero el hecho presentarla como (el resaltado es nuestro) “Una *estrategia humana*” con la que un individuo o un grupo *intenta* “afectar, influir y controlar” (1986: 18). En definitiva, construir una estrategia y ejecutarla supone asumir un riesgo, es un “intento” por encontrar un cauce en la historia.

Es cierto que asociar el término a “la delimitación y afirmación en un área geográfica” como lo hace Sack, no favorece la ampliación que el término *territorialidad* requiere, o, al menos, fija al “suelo” procesos de construcción que deberíamos empezar a entender más explícitamente como *relaciones*. Esta tensión entre cómo entender la *territorialidad humana* y los *territorios* que produce constituye un punto central en los debates actuales, así lo señalan –entre otros– Lopes de Souza, Haesbaert y Agnew. Lopes de Souza critica la definición de Raffestin por “cosificar o reificar” *el territorio* (1995: 96) al asociarlo con el *sustrato material* e identificar –en definitiva– *espacio* con *espacio natural*, Haesbaert tuerca en el intercambio reconociendo esta tensión pero destacando que Raffestin no asimila esos términos, mientras que Agnew y Oslender (2010: 209) destacan que incluso los actuales modelos de Estado modernos pueden ver fortalecida su legitimidad si saben tolerar los múltiples desafíos a sus pomposas pretensiones territoriales, algo así como que algunos estados territoriales aflojan el *suelo* para seguir tirando desde las *relaciones*.

Encuentro Internacional de murgas

Durante años se desarrolló el “Encuentro Internacional de Murgas”, una convocatoria que honraba el género a través de diversas actividades como recitales, clínicas



musicales, talleres de maquillaje o vestuario y recitales al aire libre. El epicentro fue la ciudad de Concordia, aunque durante las sucesivas ediciones la sede fue sufriendo tantas modificaciones como el programa de actividades.

El crecimiento de la propuesta impulsó a los organizadores a confiar aún más en el aspecto “transfronterizo” del fenómeno cultural que lo motivaba: durante la quinta edición en noviembre de 2008, el encuentro asumiría como sedes simultáneas el Parque Harriague en la ciudad uruguaya de Salto y el predio de la Estación Norte de trenes en la ciudad argentina de Concordia. Más aún, los organizadores redoblaron la apuesta al disponer que varias de las murgas participantes se presentaran la misma noche en ambos escenarios, previo tránsito por la artificiosa frontera dispuesta a lo largo del río Uruguay. Las condiciones parecían estar dadas muy ampliamente, nada podía fallar: las murgas estaban confirmadas, los organizadores tenían afinado cada detalle, los gastos resueltos, la expectativa del público en punta, hasta el respaldo de la Municipalidad de Concordia, la Intendencia Municipal de Salto y de las autoridades de la Comisión Técnica Mixta de la Represa de Salto Grande estaban listas. A estos factores había que sumarle la desbordante popularidad de un género artístico cuyas expresiones más potentes residen en las ciudades uruguayas, pero que movilizan a público de ambas orillas.

No todo es tan fácil ni siquiera para una expresión exquisitamente festiva y arraigada como esta, las *fronteras arbitrarias* parecen administrar sus fuerzas, sobre todo para utilizarlas en situaciones de este tipo. Mientras en ambas sedes participaban miles de asistentes a la función, las murgas que se detenían en el puesto fronterizo de la represa de Salto Grande entre el fin de una función y el comienzo de la otra sufrían el peso que los protocolos migratorios les imponían. Según Diego Franco, uno de los organizadores del encuentro, a pesar de las condiciones favorables —entre las que se encontraba el respaldo oficial de los recitales, nada menos— las premurosas murgas se encontraban en el paso de frontera con funcionarios de migraciones que ralentizaban los aceitados mecanismos logísticos que habían previsto desde la organización. “No pueden pasar pintados” era la frase más violenta que espetaban desde migraciones a las agrupaciones murgueras, generando la indignación entre sus integrantes. Si fracasaba la negociación en el puente internacional, los murguistas debían despintarse la cara para lograr traspasar el tracto migratorio lo antes posible, antes de volver a maquillarse casi al pie del otro escenario.



No se trata de una revolución o de un proceso de integración económico, de todos modos, este primer caso expone la fuerza de fenómenos –aquí, uno prioritariamente cultural– desarticulados por las fronteras modernas, la real como caprichosa existencia de regulaciones fronterizas que los desvascularizan y la necesidad urgente de superar tensiones territoriales como estas o aún mucho más preocupantes.

La Fundación M'biguá: “Ríos libres para pueblos libres”

La Fundación M'biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental es una ONG entrerriana que se constituyó en 2006 con el propósito de trabajar sobre diversas problemáticas socioambientales de la región, principalmente referidas a la defensa del agua dulce como bien común. Esta priorización no significa que obvie problemáticas como la aplicación de fracking en la región, el uso de glifosato, los perjuicios de la ley de semillas o la extensión de los montes de eucaliptos como monocultivos, M'biguá las vinculan entre sí al situarlas en la Cuenca del Plata.

La organización explicita que su principal objetivo es la “generación de iniciativas para la construcción de sociedades sustentables en el ámbito local y regional.”, destaca las acciones “de acceso a la Justicia” y las “intervenciones en la construcción de legislación ambiental y constitucional en la provincia”. En cuanto a la delimitación territorial de su acción, M' Biguá declara la ciudad de Paraná como sede y precisa que la ocupan particularmente aquellas problemáticas que “afectan (...) más específicamente a la Cuenca del Plata y la provincia de Entre Ríos”. Esta definición no le impide remitirse a conflictos que la exceden y esto se ve reflejado tanto en la enumeración de acciones como en la participación de experiencias como la Red Delta y la Alianza Sistema de Humedales Paraguay-Paraná, asociándose a otras organizaciones de perfil ciudadano de la región.

En cuanto a lo estrictamente ligado a la obviedad del territorio entrerriano, la fundación no cuestiona sus principios a través de referencias explícitas, no denuncia el carácter “artificial” de las fronteras ni llama abiertamente a abolirla en pos del “unidad” regional, continental o latinoamericana, para remitirnos a referencias muy popularizadas entre estas posiciones.

En primer lugar, insiste tanto en su carácter de organización entrerriana como en difundir problemáticas situadas en territorios estatales que no lo son. El carácter de “entrerriano” de M' Biguá orienta su acción tanto hacia organismos estatales provinciales y nacionales como a asociarse a otras organizaciones para actuar ante organismos de otros estados, incluso, nacionales. La base de esta vinculación está en bienes comunes como la



Cuenca del Plata o los proyectos sustentables, M' Biguá no apela francamente a un pasado común remoto –como el “vivir bien”– ni a uno reciente como lo hacen Ugarte y Hernández Arregui, sí insiste en señalar la participación ciudadana ante diversas convocatorias como plesbiscitos, concentraciones, acciones de concientización o presentaciones ante organismos oficiales.

No se refiere a la artificialidad de las fronteras utilizando el término “unión” ni “unidad”, entre las variantes que utiliza opta por la palabra “integración”, pero no en el sentido que le asigna Jorge Katz más arriba, sino como un proceso que muestra desde el impacto ambiental la indefectible generalización de esa unidad territorial transfronteriza. Lo expresa M' Biguá en varias ocasiones, aunque lo hace con particular elocuencia cuando se refiere a las inundaciones sufridas por las poblaciones ribereñas del río Uruguay durante 2015:

Ya hay unos 180.000 evacuados desde que se intensificaron las lluvias este fin de año, y las anegaciones provocadas por las crecientes de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, no respetan fronteras entre las naciones del Mercosur (Mercado Común del Sur) y las integra en la catástrofe ambiental.

Cómo los daños de la inundación, en el escenario actual, resultan más “integradores” que las políticas del MERCOSUR destinadas a evitarlas resulta una imagen tan valiosa como audaz para reflexionar en torno al carácter de las fronteras estatales de la región. El carácter estructurante de ciertas problemáticas socioambientales como su poder transfronterizo también aparece al conmemorar “Día Internacional de Acción contra las represas”:

Al mismo tiempo que recrudecen fenómenos climáticos que anegan pueblos enteros y provocan la muerte de miles de personas en el continente, se siguen matando los ríos de Amazonas para que la minería, la soja, la palma de aceite, las represas y las hidrovías lleguen hasta el corazón de las últimas naciones indígenas. (<http://mbigua.org.ar/wp/?p=1042>)

En esta misma publicación M' Biguá recuerda a la hondureña Bertha Cáceres, asesinada por su militancia ecologista y denuncia el recrudecimiento transfronterizo de las políticas energéticas encaradas por los gobiernos de Brasil y Argentina al avanzar en diversos proyectos para la construcción de represas de llanura.

M' Biguá ofrece una perspectiva geopolítica crítica, apelando a un acervo de términos y conceptos muy particular. Renuncia a expresiones popularizadas aunque las roce permanentemente y sostiene que la base de la unidad transfronteriza –entendiendo por



“frontera” las estatales— se encuentra en la estructuración fluvial que brinda la excepcional Cuenca del Plata.

La pertenencia y acción claramente “entrerriana” no resulta tensa con las acciones que trascienden los límites de las jurisdicciones territoriales provincial y nacional. Pero esta posición que rearticula lo territorial más allá de las pretensiones jurisdiccionales e identitarias que zanja los límites estatales desde este principio fluvial se fortalece con la valoración positiva de dictámenes que resultan “extranjeros” para la geopolítica tradicional, como cuando M’ Biguá informa que “Uruguay dice que Argentina violó el Estatuto del río al avanzar con los proyectos hidroeléctricos”.

“Recuperación del patrimonio hispánico guaraní en el corredor del río Uruguay”

El número 3 de la publicación impresa “M’ Biguá”, publicado en junio de 2007, presenta en la página 14 el proyecto de un Parque Binacional que asumiría el río Uruguay como eje estructurante. Según la descripción, el proyecto presenta un Parque Binacional entre los kilómetros 187 y 264 del río Uruguay, que iba a integrar una superficie de 4000 ha de la costa argentina, 2000 ha de la costa uruguaya además de lo que hubiese representado el cauce del río y las áreas protegidas del Parque Nacional El Palmar y de la Aurora del Palmar. En total, el parque proyectaba integrar una superficie total de 16000 ha, tomando el río como centro y no cómo límite:

Esta bella visita en la zona, desde tiempos inmemoriales, nos recuerda a los habitantes del magnífico río que la naturaleza carece de divisiones políticas y que la vida se desarrolla y reproduce generosamente en dos países que comparten su ecosistema de la mano de su imponente columna vertebral: el río Uruguay o su traducción del guaraní: Río de los pájaros. (2007: 14)

El proyecto justifica la unidad de esta delimitación valorando el río Uruguay por sus condiciones de “corredor biológico fundamental para la continuidad de la biodiversidad” y por haber sido “vía de comunicación entre las diversas formas culturales que se desarrollaron a lo largo de su cuenca, desde los asentamientos de las comunidades originarias hasta los procesos de integración regional de fines del siglo XX.” (2007: 15), de allí que:

La creación de un parque se convertiría en un instrumento de integración y desarrollo conjunto de los procesos culturales, educativos, turísticos, de formación de recursos humanos y sobre todo, el diseño de políticas que permitan reducir el impacto negativo que tienen las fronteras para el desafío de conservar la naturaleza y promover el



desarrollo regional (en ambos países) de un modo sustentable en el tiempo. (2007: 15-16)

Más allá del carácter interdisciplinario de los autores (2007: 15) y de esta doble motivación, el extracto del proyecto difundido por la publicación de M' Biguá abunda en caracterización desde “el punto de vista de la conservación de la naturaleza” en cuanto a la variedad pasajística de la región, su valor en cuanto a especies de flora y fauna, con particular atención en las especies endémicas como en las excepcionales particularidades de la “selva en galería”. A los elementos de la perspectiva complementaria –“el punto de vista social y económico”– le dedica un último y muy general párrafo, destaca en él que el proyecto “tiene un potencial fundamental: la ansiada integración regional de ambos países desde proyectos económicos posibles, sustentables en el tiempo, que permitan una integración verdadera y con la proa puesta hacia un MERCOSUR gestado auténticamente desde los pueblos.” (2007: 18)

Yendo a nuestros estrictísimos propósitos, la propuesta parte tanto de criticar las regulaciones fronterizas modernas como de articular una unidad espacial que reconozca condiciones concretas que incluyen, por ejemplo, el Parque Nacional El Palmar, una entidad enrolada en el marco general de la geopolítica tradicional, basada en estados territoriales. La asimetría en el proyecto entre el desarrollo de condiciones “ecológicas” y las “sociales y económicas” atraviesan la propuesta y debe ser entendida como un estratégico punto intermedio entre dedicar a ambos aspectos el mismo desarrollo y presentar sólo motivaciones ligadas a la conservación de la naturaleza.

El Proyecto de Parque Binacional fue el antecedente de propuestas posteriores que desarrollarán más explícitamente las condiciones sociales, económicas y culturales que los autores de 2007 habían preferido sólo mencionar. En 2009 Pablo Cansanello –entre los “profesionales de ambos países” que diseñaron el proyecto del Parque Binacional– produce *Identificación de vestigios jesuítico-guaraníes* como Documento interno de la “Administración de Parques Nacionales” en el marco de la “Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas”. El trabajo tiene por propósito “presentar un método que permita identificar los vestigios de la cultura Jesuítico-Guaraní,” en la región, partiendo de los restos correspondientes a 200 edificios, construidos por el mismo proceso de las misiones, situados a ambas márgenes del río Uruguay. Según Cansanello, si bien habrían sido construidos antes de 1767, suelen datarse posteriormente como consecuencia de que, tras la expulsión de los jesuitas, sus ruinas fueron reutilizadas; y presenta el llamado “Palacio San José” como ejemplo de estos



casos. El tramo del río Uruguay sobre el que trabaja está delimitado al norte por las ruinas del “Palacio San Carlos” y al sur por la Calera Colombo, cerca de la localidad entrerriana San José.

En agosto de 2010, un equipo integrado por Cansanello y quienes había mencionado como colaboradores un año antes presentan el *Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural Hispánico-Guaraní en el Corredor del Río Uruguay*, que se proponía:

la recuperación y puesta en valor de este valioso patrimonio cultural [jesuítico-guaraní], así como la construcción a futuro de una red de municipios, con el objetivo de vincularlos a partir de la integración en un nuevo Itinerario Cultural, como nuevo recurso social, cultural y turístico para la integración territorial. (Cassanello, 2010: 5)

En este caso el trabajo tiene como marco la Universidad del Salvador e involucra a la Municipalidad de Colón y a la Administración de Parques Nacionales y delimita la región estudiada desde Concordia hasta Concepción del Uruguay, con el mismo criterio de estructuración fluvial sobre el que se había basado Cansanello:

A partir del año 2006, se conforma un grupo de investigación interdisciplinario, con sede académica en la Universidad del Salvador. Se realizan estudios comparativos entre los vestigios arqueológicos de la Calera del Palmar y las restantes estructuras localizadas en la zona, y se determina, así, que éstas no eran un hecho aislado, sino que formaban parte de una ruta o camino productivo, a lo largo del Río Uruguay, y su ubicación respondía a una lógica en el terreno: los sitios se localizan en los pasos del río, dado que hasta 1826 no existía ningún límite entre ambas márgenes del Río Uruguay.

En abril de 2013 este Plan materializa sus primeros resultados en *Recuperación del patrimonio hispánico guaraní en el corredor del río Uruguay, provincia de Entre Ríos* a instancias del gobierno de la provincia de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones. El trabajo concreta de esta forma lo planteado en 2013, fortaleciendo los supuestos territoriales de los que había partido, incorporando leves modificaciones en relación a los casos analizados –como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto mismo– y ampliando el carácter interdisciplinario que se había propuesto en primera instancia.

Este recorrido abierto por el Proyecto del Parque Binacional en 1999 representa en su totalidad una experiencia que discute desde sus inicios con la obviedad de los territorios estatales, particularmente con el límite oriental del territorio entrerriano. Si bien entre el proyecto inicial caracterizado por un perfil muy prioritariamente de conservación ecológica y los sucesivos planes de recuperación de patrimonio histórico hay un visible



viraje que no logró encontrar una síntesis, debemos decir que toda la experiencia tuvo como supuesto central considerar el río Uruguay como eje estructurante territorial. Es cierto que el proyecto del parque no había profundizado en las condiciones sociales que lo justificaría, también es cierto que los posteriores proyectos de recuperación histórica no incorporan aquellos fundamentos brindados desde las ciencias naturales y restringen las condiciones sociales a la ocupación llamada “jesuítico-guaraní”. De todos modos, su producción brinda elementos sumamente interesantes para discutir la obviedad del territorio entrerriano y, además, ha llevado estas discusiones a través de “Jornadas de sensibilización y capacitación” (2013) entre docentes del área estudiada o “exposiciones públicas en las localidades de: Colón, Villa San José, Concordia, Concepción del Uruguay, Ubajay, General Campos, Salto, Paysandú, etc.” en las que “los pobladores locales que participaban sugerían la existencia de nuevos sitios ubicados en los campos aledaños.” (2010).

JAPL. Junta Abya Yala

La *Junta Abya Yala por los Pueblos Libres* es un centro de estudios fundado en 2007 con sede en la ciudad entrerriana de Paraná, aunque integrado por miembros residentes en distintas ciudades de la región y provenientes de diversas actividades y filiaciones.

Los posicionamientos del centro como las actividades realizadas durante estos casi diez años han tenido amplia difusión en la prensa de la región, a su vez están publicadas en su página web y, principalmente, en *Fibras de Abya yala* (2016), un volumen realizado por Julio Majul –integrante de la Junta– en los que recopila varios elementos de la experiencia. En él destaca algunos ejes de su programa:

(...) la fidelidad al pensamiento artiguista; el amor profundo por Abya yala, y en particular la América criolla, nuestra América; la visión crítica del capitalismo y todo tipo de saqueo; la adhesión a la cosmovisión y las luchas de los pueblos originarios; y la defensa a ultranza del ambiente (2016: 11)

Es constante la incorporación de la problemática territorial en las diversas expresiones que produjo esta experiencia durante sus casi diez años de existencia –materializados en comunicados, convocatorias a concursos, entrega de reconocimientos a diversos actores de la región, referencias a expresiones artísticas, etcétera–, una definición fuertemente cargada de críticas a la perspectiva geopolítica tradicional como a las restricciones que esta mirada supone. Encontramos esta cuestión en la elección de una pieza zoomórfica de la entidad Goya-Malabrigo como emblema de la Junta –el referencia al carácter fluvial de la estructuración territorial de este pueblo–, en el uso y



explicitación de la categoría “Abya Yala” como superación del sesgo representado por las entidades territoriales estatales y los límites que suponen y en la permanente referencia a la “Unidad Americana” como marco general para la crítica geopolítica. En este sentido, la Junta no sólo discute con esta matriz estadocéntrica, sino que asume una precisa posición en el debate interno sobre la unidad continental de la que hemos hablado más arriba:

Cualquiera que estudie los insectos de Brasil estará estudiando los insectos del Paraguay y la Argentina; cualquiera que estudie geología verá que el basalto nos une a los riograndenses y a los entrerrianos y santafesinos de modo inseparable, y para saber del acuífero Guaraní que ha provocado un golpe en nuestras economías habrá que explorar las fuentes de esa agua, las recargas, en el Brasil. (“Unidad Americana ¿Por qué y para qué?”)

Y así, La Araucana, Tabaré, el Martín Fierro, y así las tres poetizas de Chile, Uruguay y la Argentina que nuestro Dúo Enarmonía musicalizó con arte inconfundiblemente americano y universal. Y así las expectativas por Evo Morales y el Sumak Kawsay, por los nuevos Zapatistas y sus caracoles, todo, todo esto nos involucra, como nos involucra el imperio que pretende hacer de nosotros su patio trasero y sostener un sistema democrático restringido al voto, con congresos levantamano, con todo muy cercano a la plutocracia. La unidad, pues, por la unidad y contra la invasión.

Si bien la JAPL aplica este posicionamiento preciso al territorio estatal “Entre Ríos” en varias oportunidades, destacamos cómo lo hace en los documentos “Abolir la división que nos impusieron con esta frontera” y “Vecinos de la región llaman a reemplazar pasos fronterizos” de 2011 publicados al conmemorarse los 200 años de la “Redota”, aquella acción por la cual cientos de residentes orientales acompañaron el desplazamiento de José Gervasio Artigas desde el sitio de Montevideo hasta el Ayuí en el margen derecha del río Uruguay. En ellos presentan un “plan piloto” por el cual la Junta se compromete:

a colaborar en el diseño de un plan piloto de ambas costas para convertir las aduanas y estructuras militarizadas actuales en centros culturales de integración de los pueblos libres. Lo que sería un modelo a seguir para el resto de los pueblos hermanos, con quienes sufrimos fronteras ficticias que reprochamos.

La posición expresada en ellos, cuenta con cuatro elementos estructurantes que, como dijimos, no sólo discute la “frontera entre Uruguay y la Argentina” y critica los postulados de la geopolítica tradicional, también toma partido sobre cuatro cuestiones centrales en el seno de este debate:



a) Caracteriza la frontera dispuesta sobre el río Uruguay como “injusta y arbitraria”, “sostenida en una arbitrariedad histórica.” que ameritaría emprender el camino para abolir la división que nos impusieron con esta frontera.”. Esta obra, además, tiene autores identificables, que aplicaron en su construcción proyectos con objetivos bien claros:

Esta frontera es obra de las intrigas y presiones de toda índole del imperio británico y sus amanuenses, aprovechados también de la miopía (y la mezquindad) de sectores de poder local que optaron por soltarles las manos a los hermanos luchadores, para salvar sus privilegios. Y no es digno para los pueblos convalidar o naturalizar las maniobras de los que buscaron separarlos y los quieren divididos.

b) A diferencia de otras posiciones que priorizan condiciones económicas y/o políticas, la JAPL presenta un amplio espectro de factores que las excede y complejiza. Al afirmar que “En nuestra conciencia (y en lo posible en nuestras prácticas) no reconocemos estos límites políticos impuestos a contramano de la naturaleza y de nuestras culturas.”, la Junta no sólo incorpora factores como rasgos culturales o expresiones artísticas, sino que menciona insistentemente la base natural desarticulada por las fronteras entrerrianas:

(...) “la valoración del carpincho, el aguará popé, la comadreja, el surubí, el ombú y el chañar, tiene un plus porque con ellos convivimos, habitamos la misma casa; ellos nos precedieron en este suelo, con ellos nos acompañamos mutuamente, y además sería de muy mal gusto, y ciertamente una limitación inconducente, que todos valoremos sólo a una especie y menospreciemos a las otras. Esto bien podemos extenderlo a otros asuntos políticos, científicos, tecnológicos, religiosos, artísticos. Largos etcéteras.” (Unidad Americana ¿Por qué y para qué?)

<http://juntaamericana.com.ar.s59395.gridserver.com/unidad-americana-por-que/>

Particularmente a lo largo del río Uruguay: “Es un mismo río y somos un pueblo en sus costas. Bien decían Aníbal Sampayo y el Zurdo Martínez: ‘los pájaros comen en una orilla y anidan en la otra’. No olvidamos ese mensaje. Tarde o temprano vamos despertando.”

c) La JAPL reclama la abolición de la frontera con Uruguay basándose en factores cuyo origen no sitúa en procesos recientes como el de invasión-conquista-colonización europea, destaca la “(...) la necesidad de conservar y cultivar la unidad milenaria que nos distingue”:



Pero los lazos que nos hacen hermanos vienen del fondo del tiempo. Fueron alimentados primero por la tierra misma, los ríos, la flora, la fauna común, los paisajes compartidos, después por nuestros antepasados en este suelo, la mujer y el hombre en el trabajo, el arte, los sueños. Y son muchos los que colaboran con la unidad: trabajadores, artistas, defensores del ambiente sano, pescadores artesanales, luchadores sociales, deportistas, escritores, y tantos...

Esta profundidad demanda, a su vez, eludir el uso extemporáneo de categorías territoriales, principalmente el uso problemático de “América”: “Cuarenta mil años de historia en el Abya Yala nos invitan a vivir en armonía en la naturaleza, con lugar para todos, y en solidaridad.”

d) La última nota que nos interesa destacar, es la denuncia sobre las libertades con las que excepcionalmente se mueven actores como las multinacionales, atravesando estas restricciones limítrofes vigentes para la población en general, sobre todo para los sectores postergados. La JAPL presenta este planteo asociado al primero sobre la naturaleza de los límites estatales y es recurrente en otros documentos –por ejemplo, sobre las patentes de semillas o el Fracking–, en los textos mencionados lo utilizan haciendo referencia a los objetivos del plan IIRSA:

Hacemos esta convocatoria precavidos, también, de los intereses espurios de sectores de poder, como los que responden a la llamada “Iniciativa para la Integración” –IIRSA– que procura hacer de nuestros territorios una cancha libre con mega obras para los negocios concentrados de las multinacionales y sus aliados. Está claro para nosotros que “integración” es otra cosa. La unidad de los pueblos no es compatible con la avaricia de los poderosos del mundo que se han creído dueños de trazar nuestro futuro a su conveniencia; ni es compatible con la economía extractiva que imponen los dominadores de turno; ni es compatible con la prepotencia de las metrópolis, subordinadas al capital financiero que no se resigna a perder un predominio que heredó de otros tiempos coloniales.

Aunque la Junta se presente como “Centro de estudios” difuma la vinculación con la actividad académica en sentido estricto, al producir acciones que trasciendan este ámbito y al estar integrado por “trabajadores, estudiantes, profesores, periodistas, artistas, investigadores, gremialistas, cooperativistas”, por mencionar una de las enumeraciones que la misma Junta presenta. Esa misma diversidad lo vincula con otras experiencias, muchas de ellas que también abordan la problemática territorial regional, como el movimiento “De costa a Costa”.



El movimiento “De Costa a Costa”

Los integrantes del movimiento de Costa a Costa se definen como “un movimiento de músicos, cantores, compositores, bailarines, fotógrafos y difusores: que grupalmente queremos difundir la Música Folclórica de Entre Ríos.” Desde 2012 esta experiencia ha organizado innumerables actividades –que presentan en seis categorías– entre las que se destacan los “Encuentros”, convocatorias de tres días en los que se realiza un programa previamente definido nutrido por asistentes de toda la región.

La experiencia –como muestra el registro de estas actividades en su blog– ha convocado a decenas de artistas y referentes culturales de la región, de diversas edades, con disímiles trayectorias, formación y filiaciones. Tras estos pocos años de desarrollo, DCAC delineó con precisión el enorme corpus que define como “música folclórica entrerriana”, asumiendo lo problemático que resulta esa delimitación en virtud de la naturaleza de la identidad territorial a la que adscriben. Algunos de estos matices pueden encontrarse en lo que presentan como sus “premisas”:

1- Reconocer y difundir a los patriarcas del Cancionero Entrerriano: Linares Cardozo-Carlos Santamaría-Abelardo Dimotta-Pancho Casis-Julio Luján-Victor Velázquez-Zurdo Martínez-Eduardo Mongeloz-Jorge Méndez-Edmundo Pèrez-Hugo Duraczek-Walter Heinze-Ricardo Zandomeni-Santos Tala-Anibal Sampayo (sisi el uruguayo), y de ahí proyectarse al resto del Litoral también.

2- Cantar a nuestros Poetas como Marcelino Román, Polo Martínez, Omar Morel, Rubén Turi, Roberto Benetuce, Claudio Martínez Paiva, Daniel Elías y muchos de los mencionados en la lista anterior, ya que también escribían.

3- Adentrarnos en el Folclore Entrerriano y sus géneros con sus características: el Chamame, el Rasguido Doble, la Chamarrita, la Milonga, Tanguito Montielero y aparecerán Polkas, Huellas y Estilos también.

4- Sumar amigos en cada encuentro: Para conocernos y estar conectados, para tocar, intercambiar partituras, grabaciones, temas propios, aprender, enseñar, invitarse el día de mañana, organizar cosas en conjunto, más allá de las diferentes visiones, estilos y gustos. Encontrar la síntesis y no la contraposición! [sic!]

5- Invitar a artistas mayores, para que nos cuenten sus historias con la música, tocar con ellos y debatir ideas, teniendo en sus palabras, una guía impregnada de la sabiduría que dan los años.



Más allá de que DCAC como experiencia no se proponga en su convocatoria problematizar el territorio “Entre Ríos”, su proceso de construcción, el carácter parcial de esta construcción y lo dinámico de su existencia, es una propuesta que participa de los debates en torno a la obviedad de este territorio y a las tensiones que supone adscribir a esta identidad. Lo hace al enumerar participantes, poetas y “patriarcas” relacionados a Entre Ríos como a otros territorios, al precisar géneros musicales como las huellas y las polkas (tan ligadas a Entre Ríos como a tantas otras identidades provinciales), al elegir las referencias fluviales para presentar sus actividades. Podría adjudicarse a la participación de referentes como Tirso Fiorotto o Mauricio Castaldo que han problematizado la cuestión a título personal o en ámbitos como la JAPL, o a la movilidad residencial que experimentan músicos –nóveles o experimentados– nativos en la provincia. Aunque se presenta como posibilidad que sea en el corpus de producciones artísticas denominadas “Música Folclórica de Entre Ríos”, en los términos que esta experiencia lo precisa, donde encontraremos elementos que problematizan el territorio entrerriano sin renunciar a esa adscripción identitaria.

“De Costa a Costa” hace referencia a un chamamé del Zurdo Martínez, entre quienes define como “patriarcas” se destaca la presencia de Aníbal Sampayo que ha escrito sobre las tensiones entre la vida ribereña a dos costas y las demarcaciones fluviales estatales.

En cuanto a las cinco experiencias examinadas cabe señalar en primera instancia que presentan críticas a la geopolítica estatal enfocándose en la arbitrariedad de los límites entrerrianos. Ninguna se sitúa desde una perspectiva nostálgica, ni reniegan de la identidad entrerriana de corte territorial moderno en su sentido más restringido. Desde ese lugar, proponen revisar los rigores de estas delimitaciones sobre diversos aspectos sociales, entre los que se destacan las problemáticas ambientales, el intercambio artístico o los proyectos políticos emancipatorios. La ampliación de los casos, como la profundización en el examen del tipo de superación que este tipo de experiencias proponen, resulta un punto ineludible entre nuestros debates, sean en el marco de la actividad académica o no. En todos los casos, hay un claro desafío o cuestionamiento a los porosos límites contruidos de manera obstinada por la estatalidad.

Por razones de espacio no podemos desarrollar los abordajes de las ciencias sociales en nuestra región, quedan en la bibliografía indicados los trabajos pertinentes a la construcción del territorio entrerriano.



Que hallemos propuestas de superación a la obiedad señalada entre experiencias no vinculadas directamente con la investigación en ciencias sociales es un indicador que merece mucha atención. Tanta, por lo menos, como hallar pervivencias en trabajos académicos recientes, sobre todo en aquellos que declaran ser críticos del entronizamiento de las fronteras modernas. Habla de las deudas dentro de la actividad académica como del necesario diálogo entre ellas y otras que no lo son pero asumen esta agenda.

El territorio “Entre Ríos” es un producto concreto y reciente, construido en el marco de una territorialidad puntual como lo es la territorialidad moderna, en procesos espaciales de factura milenaria entre los que se hizo lugar a través de diversas y distinguibles estrategias puntuales.

Si bien el debate no es franco, ni dentro ni fuera de las ciencias sociales, hay sobrados elementos para abordarlo y profundizarlo dadas, sobre todo, las diversas y reconocibles expresiones, sean pervivencias del modelo tradicional como propuestas de superación.

Bibliografía

Agnew, John (2005) *Geopolítica: Una re-visión de la política mundial*. Madrid, Trama.

Agnew, John y Ulrich Oslender (2010) “Territorialidades superpuestas, soberanía en disputa: lecciones empíricas desde América Latina” en *Tabula Rasa*. Bogotá, Colombia, No.13: 191-213, julio-diciembre 2010 ISSN 1794-2489.

Bernasconi, Alejandro (2011) “Tardofeudalismo periférico y transición al Capitalismo. El oriente entrerriano a fines del siglo XVIII.” En *II Jornadas de Ciencias Sociales “Espacios, Culturas e Identidades”*. Concepción del Uruguay, FHAyCS / Universidad Autónoma de Entre Ríos.

González, Ariosto (1950) “En torno a la fundación de Montevideo”, en *Diario de Bruno de Zabala sobre su expedición a Montevideo*. Montevideo, Barreiro y Ramos.

González Lebrero, Rodolfo (2002) *La pequeña aldea, sociedad y economía en Buenos Aires (1580-1640)*. Buenos Aires, Biblos.

Grimson, Alejandro (2012) *Los límites de la cultura*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Jauretche, Arturo (1968) *Manual de zoncetas argentinas*. Buenos Aires, Peña y Lillo Editor.



Latini, Sergio (2012) [En línea] “Relatos del conflicto interétnico: Francisco García de Piedrabuena contra los “charrúas y otros infieles”, 1715” en *Corpus*. Archivos virtuales de la alteridad americana, Vol. 2, N°2, 2do. semestre 2012, [Última consulta: 25/5/2017]. Disponible: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus>

Latini, Sergio H. (2013). [En línea] “Reducción de charrúas en la ‘Banda del norte’ a principios del siglo XVII: ¿Logro del poder colonial o estrategia indígena de adaptación?”. En *Memoria americana*, (21-2), 48-65. [Última consulta: 25/5/2017]. Disponible en: <<https://bit.ly/392tFSF>>

Latini, Sergio y Carina Lucaioli (2014) “Fronteras permeables: circulación de cautivos

Marcó Muñoa, Ricardo (2006) “Presencia de lo europeo en Entre Ríos: una sociedad multicultural con identidad local.”, en *Tiempo de gestión*. Año 2. Número 2. Pp. 45-60.

Pibernus, César Aristides (2009) “La que te nombra” en *Boletín Municipal*, Chajarí, Municipalidad de Chajarí y Honorable Concejo Deliberante. p. p. 4-8.

Pibernus, César (2010). *Caminos nominados (y nombres caminados) Mojones y memoria en la redacción estatal del nomenclador urbano de Villa Libertad-Chajarí*. Concordia, UADER. Tesina de grado inédita.

Pibernus, César (2012) [en línea]. “Ni un pie en cada lugar, ni los dos en tierra ajena: juntos y en nuestro continente. Los tentadores equívocos sobre nuestra historia, mirando el gamonalismo peruano”, en *e-I@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, Vol. 9, n° 34, Buenos Aires, enero-marzo de 2012, pp. 3-18 [Consulta: 20/5/2017]. Disponible en <<http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/e-latina/>>.

Pressel, Griselda. (2009). “Entre la ley y el orden: Los vagos y malentretenidos en el espacio entrerriano en la primera mitad del siglo XIX”. Ponencia presentada en el *III Congreso de Historia e Historiografía*, Santa Fe, 7 y 8 de mayo.

Rossi, Juan José (2002) *Los charrúas*. Buenos Aires, Ediciones Galerna.

Rossi, Juan José (2015) *La invasión europea en América. Abya yala sojuzgada*. Buenos Aires, Ediciones Colihue.

Sack, Robert [En línea] (1986) *Human Territoriality. Its Theory and History*. Cambridge Studies in Historical Geography. [Fecha de consulta: 13/02/2018] <http://www.humanas.unal.edu.co/estepa/files/9713/3050/6990/Sack_territorialidad.pdf>.



Schmidl, Ulrico (1997) *Viaje al Río de la Plata*. Buenos Aires, Emecé.

Serrano, Antonio (1955) *Los pueblos y culturas indígenas del Litoral*. Santa Fe, El Litoral.

Schmit, Roberto (2000) "Población, migración y familia en el Río de la Plata. El oriente entrerriano, 1820-1850", *Anuario IHES*.

Schmitt, Roberto y Djenderedjian, Julio. [En línea] (2006). "La empresa rural en el largo plazo: Cambios en la explotación de una gran estancia rioplatense entre el orden colonial y el nacimiento del capitalismo, 1780-1870". *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, (29), 7-49. [Última consulta: 20/05/2017]. Disponible en < <https://bit.ly/38hwb8E>>.



El Movimiento Transnacional por la Justicia Fiscal: Asimetrías, creatividad y autonomía en América Latina y África Subsahariana

Alice Soares Guimarães
Federica Duca

Resumen

En las últimas décadas asistimos a la emergencia de un movimiento transnacional por la justicia fiscal (MTJF), inicialmente impulsado desde los países desarrollados del Norte pero que se expandió a los países del Sur Global. Esta ponencia explorará este movimiento en América Latina y África, buscando identificar similitudes y diferencias en sus manifestaciones locales y caracterizar las relaciones entre sus miembros de distintas regiones. Basadas en análisis documental, entrevistas y grupos focales, analizamos comparativamente estas experiencias mirando la estructura de oportunidad política; el encuadramiento interpretativo; el repertorio de acción colectiva y la movilización de recursos del movimiento. Identificamos que, mientras en las dos regiones la movilización de recursos reproduce las asimetrías Norte-Sur y el repertorio de acción se caracteriza por una “modularidad acrítica”, diferencias en la estructura de oportunidad política y en el encuadramiento de procesos resultan en una pluralidad de configuraciones alternativas. Así, si bien el MTJF es marcado por asimetrías, la creatividad social y apropiación reflexiva de la agenda global reinscribe la posibilidad de autonomía en sus manifestaciones regionales.

Palabras clave

Movimientos Transnacionales; Justicia Fiscal; Asimetría Creatividad Social; Autonomía.

Introducción

En las dos últimas décadas, en un contexto global marcado por crisis económicas y financieras internacionales, el debilitamiento del Estado de bienestar y la proliferación de medidas de austeridad, y el aumento de flujos financieros ilícitos discusiones acerca de la justicia fiscal adquirieron prominencia. Cada vez más una multiplicidad de actores reivindican el papel central de las políticas fiscales en la constitución de sociedades más democráticas e igualitarias, y de un orden global más justo (Guimarães, 2019).

Movilizaciones políticas por justicia fiscal no son novedad, remontando al inicio de la modernidad como reacción a los procesos de formación del estado nacional y al colonialismo. Pero las movilizaciones contemporáneas presentan una diferencia central



a sus predecesores: dada la fase actual de la globalización y del capitalismo estas inevitablemente implican una dimensión global. Como resultado, actualmente el activismo fiscal ocurre predominantemente en el contexto de redes transnacionales.

Estos nuevos movimientos transnacionales por la justicia fiscal (MTJF) son el objeto de análisis de este artículo. Nuestros objetivos son, primero, comprender cómo estos movimientos se manifiestan en diferentes sociedades. Además, buscamos establecer qué tan horizontales o, por el contrario, asimétricos son estos movimientos, partiendo del análisis de las relaciones entre sus miembros de diferentes regiones. Para eso exploramos su funcionamiento en diferentes países de Sudamérica y África Subsahariana, identificando similitudes y particularidades en sus manifestaciones locales mediante el análisis del contexto de su surgimiento; la estructura de oportunidad política en que operan; su repertorio de acción colectiva; los recursos que movilizan y los encuadramientos interpretativos dados a la cuestión fiscal. Especial atención es dada a cómo los actores en los niveles regional, nacional y local se apropian de la agenda global.

La recopilación de datos para el artículo se basó en diferentes estrategias metodológicas. Realizamos trabajo de campo en diferentes países de América del Sur y África Subsahariana, entrevistas y grupos focales con miembros de los movimientos. Analizamos textos clave y otros tipos de medios producidos por movimientos y organizaciones de justicia fiscal. Finalmente, recibimos retroalimentación de activistas y funcionarios de autoridades tributarias de diferentes países en conversaciones informales, conferencias, reuniones de la sociedad civil y debates sobre políticas públicas en que participamos en los últimos 4 años.

Los orígenes del movimiento contemporáneo por la justicia fiscal

El MTJF es compuesto por una pluralidad de actores de la sociedad civil, reunidos en redes o plataformas con el objetivo de influir en las políticas fiscales alrededor del mundo para que cumplan con principios de justicia social. Sus críticas, propuestas y demandas tocan los tres elementos que componen las políticas fiscales: sistemas tributarios; gastos públicos; y procesos de formulación, implementación y rendición de cuentas sobre estas políticas. Estos movimientos surgen en reacción a la intensificación de la globalización y sus procesos conexos: la financiarización del capitalismo y el aumento del activismo transnacional. Además, en muchos países del Sur Global la llamada "tercera ola de democratización" desempeñó un papel central en su creación.



Desde finales de los 1970 el sistema capitalista pasó por transformaciones profundas, con la reestructuración del capital a escala global. Como resultado de cambios tecnológicos y procesos de liberalización y financeirización que se consolidaron en los 1990, la fase actual del capitalismo tiene como principal característica un grado de movilidad del capital sin precedentes. Estos cambios generaron nuevos desafíos a las políticas fiscales y confirieron a su dimensión internacional relevancia central.

En primer lugar, el aumento de la internacionalización de la economía volvió a los estados vulnerables a la *competencia tributaria internacional*. Como las empresas transnacionales pueden elegir más fácilmente donde operar y tributar según las condiciones fiscales ofertadas, pueden presionar a los gobiernos para recibir tratamiento fiscal preferencial. Esto llevó a muchos gobiernos, especialmente en los países en desarrollo, a la competencia fiscal para atraer inversiones extranjeras directas, adoptando exenciones o reduciendo las tasas impositivas a ganancias corporativas y, como resultado, erosionando su base impositiva potencial (Christensen et al., 2005:69).

La actual fase de la globalización y del capitalismo también se caracteriza por el crecimiento exponencial de la *industria global de evasión fiscal*. Los cambios tecnológicos y mayor movilidad del capital facilitan a que empresas transnacionales y grandes fortunas evadan regímenes tributarios nacionales mediante diferentes estrategias, tal como utilizando paraísos fiscales. En muchos países el efecto combinado de la competencia tributaria y la evasión fiscal fue una reducción neta de recursos para financiar políticas sociales y servicios públicos. En respuesta a las crecientes presiones fiscales, los gobiernos cada vez más han recurrido a trasladar la carga tributaria del capital al trabajo y al consumo (lo que es socialmente regresivo), reducir los gastos sociales y/o privatizar servicios públicos (Christensen et al., 2005:63;69).

Así, la fase actual del capitalismo se caracteriza por la hegemonía del capital transnacional y la débil gobernanza fiscal de muchos estados. Como Leaman y Waris señalan (2013:8), “transnational (i.e., territorially *unbound*) capital has increased its political leverage to the extent that it can and does deploy regulatory and tax arbitrage to influence territorially *bound* political jurisdictions”. Esto resulta en la subordinación de comunidades políticas nacionales a la hegemonía del capital transnacional, y conduce a la persistencia y/o al aumento de la interdependencia asimétrica entre Estados.

Desde finales de 1990 organizaciones de la sociedad civil comenzaron a movilizarse contra los problemas mencionados, exigiendo justicia fiscal. Dado el carácter



internacional de la cuestión, esto implicó inevitablemente una dimensión global en estas movilizaciones. Así, el activismo fiscal contemporáneo ya nasce transnacional. De hecho, su surgimiento está vinculado a otra característica central de la actual fase de la globalización: la intensificación del activismo transnacional. Como destaca Tarrow (2005:19), la internacionalización limita, pero también crea oportunidades para que los ciudadanos participen en acciones colectivas. Factores como comunicación electrónica rápida, viajes internacionales más baratos, difusión del idioma inglés y la propagación del "guión" de la modernidad han facilitado el activismo transnacional. En las últimas décadas asistimos a la proliferación de foros, redes y otros espacios de movilización transnacional, en los cuales los modelos económicos hegemónicos son duramente criticados por su incapacidad de generar un desarrollo que sea sostenible, inclusivo y justo. Se destaca en este sentido la creación del Foro Social Mundial (2001), que se consolidó como uno de los principales espacios críticos a la globalización capitalista y de construcción colectiva de propuestas alternativas de desarrollo.

El surgimiento de los movimientos contemporáneos por justicia fiscal fue facilitado y moldeado por este contexto. En 1998 la Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne (ATTAC) fue creada como un movimiento internacional dedicado al desarrollo de alternativas sociales, ambientales y democráticas al proceso de globalización, guiadas por los principios de igualdad de riqueza, antiglobalización y promoción de los derechos sociales. El movimiento se guía por el lema "Otro mundo es posible" y el principio de (re)politizar la justicia. Alejándose de las formaciones clásicas de los movimientos sociales, el *modus operandi* de ATTAC se basa en la interacción entre contextos locales, nacionales y globales.

Su demanda inaugural fue la introducción de la Tasa Tobin, un impuesto a transacciones especulativas sobre los mercados de divisas. Para la organización la Tasa impulsaría la cooperación, el desarrollo y la democracia local al facilitar la regulación de los mercados financieros, el cierre de los paraísos fiscales y la introducción de impuestos globales para financiar bienes públicos. Esto permitiría a actores de la sociedad civil reclamar espacio en la esfera financiera. Además, ATTAC propuso que los ingresos de la Tasa fueran utilizados para impulsar el desarrollo en países de baja renta.

Si bien ATTAC fue el pionero del nuevo activismo fiscal transnacional, en los años siguientes otros actores se juntaron a lo que se convirtió en un nuevo movimiento emancipatorio que plantea la redefinición radical del desarrollo económico como determinado esencialmente por los regímenes fiscales globales, regionales y



nacionales. En 2003, por ejemplo, la Rede de Justicia Fiscal (TJN) fue creada centrándose en la lucha contra los paraísos fiscales y la incidencia social y política por la transparencia fiscal.

Finalmente, en muchos países de América Latina y África otro proceso central en el surgimiento del nuevo activismo fiscal fue la ‘tercera ola de democratización’. Más conectada con contextos nacionales, la redemocratización cambió la estructura de oportunidades políticas, trayendo más apertura para la movilización social. Además, las nuevas promesas democráticas y las expectativas resultantes de los ciudadanos no se cumplieron, lo que trajo descontento popular. La mayor apertura política asociada con el desencanto democrático impulsó el surgimiento de nuevos movimientos sociales que presionaban por una democracia más sustantiva que otorgase no solo derechos civiles y políticos sino también socioeconómicos. Aunque de manera indirecta, estos movimientos critican las políticas fiscales, exigiendo más transparencia y el uso de recursos públicos para objetivos redistributivos y de bienestar social.

Características del Movimiento por la Justicia fiscal en sus diferentes niveles

Varios movimientos sociales en el mundo articulan críticas sobre los sistemas tributarios y los gastos públicos y formulan demandas de transparencia fiscal y rendición de cuentas. Pocos, sin embargo, tienen los impuestos como principal razón de movilización. En general la temática surge como un factor más en el surgimiento o solución de problemas en otros ámbitos. Como resultado el MTJF es altamente ecléctico y consta de diferentes tipos de organizaciones trabajando en una miríada de temas.

Muchos de estos actores se articulan en la Alianza Global para la Justicia Fiscal (GATJ), una red transnacional creada en 2013 para coordinar las acciones de organizaciones que trabajan por la justicia fiscal. La GATJ está formada por cinco redes regionales que en conjunto representan a cientos de organizaciones unidas en la GATJ por “mayor transparencia, control democrático y redistribución de la riqueza en los sistemas fiscales nacionales y globales”.

El encuadramiento interpretativo dado a la cuestión tiene como núcleo el impacto del crecimiento global de la evasión fiscal y otros abusos tributarios en privar a los Estados de los ingresos fiscales necesarios para revertir “la creciente desigualdad”, combatir la pobreza e invertir “en servicios públicos, desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático”. Según la Red,



“Las grandes fortunas, los bancos y las corporaciones multinacionales han construido un sofisticado sistema de centros financieros internacionales opacos (paraísos fiscales) con el apoyo de ejércitos de contadores, abogados y grupos de presión, con el fin de pagar deliberadamente cada vez menos impuestos sobre sus beneficios y riqueza... La evasión fiscal sistémica (legal e ilegal) ha llevado a la gente común a ver cómo la riqueza pública fluye hacia el exterior, hacia las manos privadas de unos pocos”.

La solución propuesta por la GATJ es la adopción de políticas fiscales progresivas que permitan a los gobiernos movilizar recursos para financiar servicios y políticas públicas necesarias para garantizar los derechos humanos. La movilización de recursos internos reduciría la dependencia de la ayuda internacional y el financiamiento por deuda. Además, políticas fiscales justas corregirían el desequilibrio de poder entre ciudadanos y corporaciones, y fortalecerían la rendición de cuentas del Estado y el contrato social.

Así, en encuadramiento del problema se centra en los abusos fiscales y la resultante privación de los Estados de recursos necesarios para reducir las desigualdades económicas y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. La solución propuesta es el aumento de la transparencia y control democrático sobre los asuntos fiscales y la adopción de políticas tributarias que permitan incrementar los ingresos estatales y redistribuir la riqueza.

La principal acción colectiva de la GATJ es la incidencia social y política mediante campañas orientadas a exponer el impacto negativo de las injusticias fiscales y aumentar la solidaridad en torno de la lucha por la justicia fiscal. Aunque el principal receptor de sus demandas son los Estados, ya que la organización afirma ser su obligación implementar políticas fiscales justas, sus acciones también se dirigen a la élite económica global y otros sectores de la sociedad civil. Su acción más prominente son las *Jornadas Mundiales*, movilizaciones simultánea alrededor del mundo para aumentar la conciencia pública y la presión sobre gobiernos para que promuevan la justicia fiscal.

Para cada campaña kit de herramientas son producidos, en diferentes idiomas, para estandarizar las movilizaciones. Este material incluye el encuadramiento interpretativo del problema; la marca de la campaña (branding); las acciones que deben ser adoptadas y detalles sobre las mismas. Aunque mencionan puntualmente que deben ser adaptados a los contextos nacionales, estos kits reiteradamente instan a los que participen en la campaña a utilizar sus recursos y seguir los mensajes, demandas, objetivos, tácticas y



marcas comunes para “ayudar a construir nuestra identidad de campaña colectiva” y fortalecer “el perfil de nuestro movimiento global”.

En lo que se refiere a los recursos movilizados por la GATJ, los financieros vienen de donantes. Sus recursos humanos son activistas y académicos que actúan en las diversas organizaciones miembro de la Red. Un recurso fundamental para su acción es la internet, principalmente las redes sociales. Así, si bien la globalización, la tecnología y el flujo más fácil de información y personas desempeñan un papel central en los problemas fiscales, la reacción a estos utiliza de las mismas armas.

El GATJ surgió como un spin-off de la Red de Justicia Fiscal (TJN), uno de los principales representantes del activismo fiscal contemporáneo y que reivindica haber desempeñado “un rol central en la creación de un marco intelectual coherente para comprender los paraísos fiscales” y la globalización financiera. Organizacionalmente la TJN opera a través de ‘capítulos’ en distintos continentes y es financiada por donantes. A su vez, la Red financia actividades de sus capítulos regionales.

Su objetivo es impulsar una agenda política donde los asuntos fiscales sean centrales en la construcción de la justicia social. Según su auto-descripción,

“We draw on our collective expertise to research, design and push original new agenda-setting positions. We seek to be ‘beserkers,’ opening up new spaces for others to enter. We challenge conventional wisdom, we relish lively debate, and our work gets media attention. We can quickly take positions on current news and issues, without needing long stakeholder consultation”.

En el ámbito de las acciones, la TJN une fuerzas con sindicatos, organizaciones locales, ONG y organismos profesionales para promocionar la educación popular, capacitación y sensibilización en temas fiscales. Además, realiza campañas, investigaciones y publicación de informes, podcasts en diferentes idiomas y organiza conferencias. La mayor parte de su actividad gira en torno a cuatro temas. El primero articula justicia fiscal y derechos humanos enfatizando los impactos negativos de la evasión y elusión fiscal en estos. El argumento central es que los impuestos están intrínsecamente vinculados a las desigualdades, y las formas por las que este vínculo se configura afectan a los derechos individuales. La segunda área temática explora las formas en que se entiende la “competitividad” y los peligros de la dependencia del sector financiero. Vinculado a esto está el tercer programa que se dedica a la investigación e incidencia para la transparencia fiscal, con el objetivo de romper con el sigilo del sector financiero. Finalmente, la TJN lleva a cabo un programa sobre la “Magnitud de la



injusticia fiscal" que resulta de las operaciones *offshore* de multinacionales. El objetivo del programa es evaluar el impacto de la evasión fiscal en cada país individualmente, promover campañas y apoyar el desarrollo de políticas adecuadas para hacer frente al fenómeno.

Los temas explorados por la TJN son en gran medida incorporados por sus capítulos en África y América Latina. Sin embargo, identificamos particularidades en la prioridad otorgada a estos temas y al encuadramiento interpretativo de la cuestión fiscal.

En Sudamérica la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALyC), fundada en 2011, es la principal organización que se dedica a la temática. La Red es miembro de la GATJ y actualmente está compuesta por 27 organizaciones en 15 países y una organización regional. La mayor parte de sus miembros son ONGs e institutos de investigación, algunos *Think Tanks* y organizaciones confesionales. La RJFALyC se define como un "espacio independiente que busca fortalecer la acción de las organizaciones que la integran". Central en sus objetivos es la búsqueda de "alternativas al modelo fiscal actual" mediante la creación de "un espacio de diálogo, articulación y fortalecimiento de las organizaciones sociales... que trabajan sobre algún aspecto de la fiscalidad a partir de un enfoque de justicia fiscal".

Tal como la GATJ y la TJN el encuadramiento interpretativo dado por la RJFALyC a la problemática de la justicia fiscal incluye los "diversos mecanismos que estimulan la evasión y elusión tributarias, la fuga de capitales y el lavado del dinero". Asimismo, sus demandas incluyen normas internacionales que promuevan "mayor transparencia y coordinación en materia tributaria"; el pago justo por parte de las empresas transnacionales de sus obligaciones a los países de la región; y "el control de la banca global y la desaparición de las guaridas fiscales". Así, los abusos tributarios y su dimensión global son parte de su discurso y acciones. Sin embargo, la dimensión doméstica también recibe atención, resaltándose dos aspectos: el cuestionamiento del modelo tributario dominante en la región, que se basa predominantemente en impuestos indirectos; y la necesidad de combatir a la corrupción y fortalecer a las "administraciones tributarias nacionales a fin de aumentar el nivel de recaudación".

Así, el encuadramiento interpretativo de la RJFALyC involucra tanto a la dimensión global como la regional y la nacional, definiendo la justicia fiscal como

"un enfoque basado en un sistema de derechos y obligaciones equilibrado, donde la recaudación de recursos sea progresiva, equitativa, y transparente y donde se asegure



el financiamiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, logrando altos niveles de equidad socioeconómica en armonía con el medio ambiente. Esto supone avanzar en un proceso de redistribución de ingresos y de riquezas que promueva la equidad y la inclusión social, tanto a nivel nacional, subregional, regional e internacional”.

En sus demandas y propuestas se destacan los temas de la justicia presupuestaria; la realización de reformas tributarias para que la política fiscal cumpla una función redistributiva; y el fortalecimiento institucional de los organismos estatales involucrados en cuestiones fiscales. Sus principales acciones son la formación, capacitación, investigación, incidencia social y política al nivel nacional, regional y global en los temas de evasión fiscal, flujos financieros ilícitos y paraísos fiscales; reforma fiscal; gasto tributario y regulación de inversiones. Entre los principales financiadores de sus acciones están la Unión Europea, Oxfam, TJN y la Coalición por la Transparencia Financiera.

Cabe notar que en Latinoamérica los orígenes del activismo fiscal contemporáneo se encuentran, además de los procesos discutidos anteriormente, en los movimientos transnacionales contra la deuda. En el contexto de la campaña Jubileo 2000 muchas organizaciones en la región interpretaron la estructura de oportunidad política como favorable para movilizarse por la justicia económica. Después de la campaña, algunas de las ONGs especializadas en la temática de la deuda se unieron al entonces emergente movimiento por la justicia fiscal en principios de los 2000. Esto es el caso de 1/3 de los miembros de la RJFALyC en Sudamérica, incluyendo Latindadd, otra red que para la mayor parte de los actores es la principal referencia del MTJF en la región.

Mientras la RJFALyC surge en el contexto del MTJF ya consolidado y opera siguiendo en gran medida sus estándares, algunos de sus miembros lo precedieron en los debates sobre la justicia fiscal y desarrollaron su encuadramiento de la cuestión de forma más autónoma. Esto resultó en algunas diferencias significativas entre estos movimientos y sus pares en la arena global. Primero, muchos miembros de la RJFALyC insisten en usar "justicia fiscal" en lugar de "justicia tributaria". Como explica un miembro del Comité Directivo de Latindadd,

“nosotros hablamos de justicia fiscal incluso más que de justicia tributaria. Porque si hablamos del tema tributario solo son impuestos. Cuando hablamos de fiscalidad hablamos de dos dimensiones. Cómo se recauda, quién paga, pero además en qué se invierte lo que se ha recaudado. Esa es la dimensión de que hablamos al promover la



justicia fiscal. No solo planteamos que se debe recaudar más, que quien más tiene más pague, sino que además tiene que haber transparencia y eficacia en cómo se invierten estos recursos, que es la segunda parte del problema que tenemos en América Latina”.

Para muchos actores en América Latina la justicia tributaria es solamente un componente de la justicia fiscal, que debe también incluir la "justicia presupuestaria" pues en muchos países la existencia de recursos no se traduce en gastos públicos que observan principios de justicia (Guimarães, 2009). El énfasis en los gastos públicos incorpora nuevos elementos al encuadre interpretativo de la justicia fiscal, se destacando el actual contexto de desaceleración económica y austeridad emergente. Cabe notar que el tema de la austeridad siempre estuvo presente en los discursos sobre la justicia fiscal en la región, con la crítica al modelo neoliberal recibiendo más relieve que las cuestiones de la evasión y elusión fiscal o los flujos financieros ilícitos.

Como resultado, una acción estratégica en el repertorio de muchas organizaciones es el análisis y monitoreo presupuestario y de políticas públicas. En el nivel nacional muchos de los miembros de la RJFALyC monitorean los efectos distributivos de la política fiscal y realizan campañas sobre la justicia en la asignación de recursos públicos. Esta línea de acción también implica demandas de mayor transparencia presupuestaria, con el desarrollo de instrumentos y metodologías con este objetivo. Cabe notar que el destinatario principal de las demandas es el Estado. Aunque también interpelan a actores privados para que paguen sus impuestos de manera justa, incluso en este ámbito el Estado es el actor central al que se dirigen: la demanda son reformas fiscales para poner fin a los privilegios y abusos del sector privado.

Una segunda diferencia significativa ocurre en la articulación entre justicia fiscal y justicia social, que enfatiza cómo las políticas fiscales pueden contribuir a reducir o, por el contrario, profundizar las desigualdades sociales y reclama una función redistributiva para los sistemas tributarios. A nivel global esta articulación es estructurada primariamente en términos económicos, centrándose en desigualdades de clase, la redistribución de la riqueza y el combate a la pobreza. Recientemente, como resultado de la presión de activistas y académicas feministas las desigualdades de género se incorporaron al debate (Guimarães, 2019). Pero en muchos países de América Latina otra dimensión de desigualdad es explorada en relación con las políticas fiscales: las por razón de pertenencia étnica. En esta línea algunas organizaciones trabajan en el monitoreo presupuestario y realizan incidencia política para que se destinen recursos públicos a políticas inclusivas que contribuyan a reducir las desigualdades étnicas.



Finalmente, el énfasis en los derechos indígenas también amplía otro debate que enmarca el tema de la justicia fiscal globalmente: la articulación entre derechos humanos y las políticas fiscales. En los últimos años diferentes actores pasaron a abordar la justicia fiscal como una cuestión de derechos, alegando ser obligación de los estados utilizar la cantidad máxima de recursos disponibles para promover los derechos sociales, económicos y culturales de sus ciudadanos. La articulación jurídica entre derechos humanos y justicia fiscal inicialmente se basó la Declaración Universales de los Derechos humanos. Sin embargo, este marco fue progresivamente adaptado, en un movimiento de expansión para incluir los derechos específicos de determinados grupos excluidos, por ejemplo, los derechos de las mujeres (Guimarães, 2009). La inclusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas representa una nueva expansión del enfoque jurídico operada por los representantes del MTJF en la región. La incorporación de la etnicidad al debate trajo innovaciones también en el repertorio de acción colectiva, pues la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas ha incorporado el litigio como táctica adoptada por algunos de los miembros del MTJF en la región.

En el continente africano el principal actor del MTJF es la Red de Justicia Fiscal-África (TJN-A), creada en 2007 como un capítulo de la TJN y que es miembro de la GATJ. Actualmente es compuesta por 31 organizaciones en 15 países. Su objetivo central es promover “Una nueva África donde prevalezca la justicia fiscal para contribuir al desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible”. De manera similar a las otras redes, TJN-A respalda una visión de justicia fiscal basada en la promoción de sistemas tributarios progresivos, justos y transparentes, defendiendo una política fiscal favorable a los pobres y que frenen las fugas de capitales e incrementen la movilización de recursos internos.

Uno de los propósitos principales de la Red es detener los flujos financieros ilícitos (FFI), presionando para que las agendas fiscales incorporen la temática. Para esto, TJN-A busca proporcionar una plataforma en la que diferentes actores puedan cooperar en la lucha contra los FFI y las políticas y prácticas tributarias perjudiciales. Su objetivo último es lograr un marco regulatorio financiero global inclusivo y transparente.

Otros temas enfocados por la TJN-A incluyen la interacción entre el funcionamiento de los sistemas tributarios, la arquitectura financiera internacional y el sector extractivo, abogando por mayor transparencia fiscal y el fortalecimiento de la regulación del sector. La Red también explora la relación entre desigualdad fiscal y inversiones, suscribiéndose a la retórica del 1%, y cómo esto constituye una amenaza para el



desarrollo de la democracia. Finalmente, el discurso de la Red enfatiza el vínculo entre la dimensión global de los impuestos y las dificultades de desarrollar políticas públicas para la inclusión social a nivel regional y nacional, y cuestiona la carga desproporcionada de los impuestos indirectos como resultado de la incapacidad para recaudar ingresos fiscales de otras fuentes, por ejemplo, del sector extractivo.

En lo que refiere al contexto de su emergencia, la TJN-A fue lanzada en el Foro Social Mundial de 2007 en Nairobi, donde se discutió la necesidad del continente de hacer frente a las consecuencias negativas de los programas de ajuste estructural en la región, y realizar reformas fiscales progresivas. La creación de la Red responde precisamente a esta necesidad. Además de fuerzas globales y regionales, demandas nacionales también impulsaron su creación.

Al nivel nacional, muchos países estaban pasando por procesos de construcción estatal, en los que la reforma fiscal era componente central. En este proceso surgieron demandas para profesionalizar y asignar recursos adecuados a las administraciones tributarias, y incrementar la transparencia de las transacciones internacionales. La exigencia de transparencia se enmarca tanto a nivel internacional como nacional, a menudo asociada con la lucha contra la corrupción. Paralelamente, diversos países de la región pasaban por procesos de descentralización (tanto política como fiscal), que desencadenaron demandas por mayor participación ciudadana y propuestas de presupuestos participativos como forma de promover la buena gobernanza local.

La formación de la TJN-A brindó la oportunidad no solo para desarrollar una agenda regional y para que organizaciones nacionales y locales ya existentes se incorporasen a una agenda más amplia, sino también permitió canalizar y fortalecer las sus demandas. En este caso, la red abrió el espacio para que las organizaciones nacionales y locales formaran parte de una agenda más amplia y, por ejemplo, la búsqueda de la transparencia de las multinacionales que operan en los países y soliciten una asignación justa de recursos.

En cuanto al repertorio de acción colectiva, sus principales estrategias son capacitaciones y campañas orientadas a crear “conciencia tributaria”. Estas campañas y demás acciones de la TJNA se orientan principalmente al desarrollo de capacidades, mediante la coordinación de una serie de actividades con actores clave a nivel regional y nacional. Para esto, un elemento fundamental es la producción y difusión de conocimiento sobre la tributación. La Red proporciona el espacio y los recursos para abordar temas como los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales; la relación entre



impuestos, desigualdad y desarrollo; el fortalecimiento de las administraciones tributarias, la sensibilización y la educación fiscal.

Entre sus acciones se destacan las relacionadas al tema de los FFI, tales como la campana “Stop the bleeding”, y la realización de una conferencia anual en Nairobi, que reúne a todos los miembros de la red para discutir el tema y explorar nuevas formas de incidencia, investigación y difusión del conocimiento sobre el mismo. En lo que toca a la investigación se destaca el proyecto “Capacity for Research and Advocacy for Fair Taxation”, cuyo objetivo es facilitar una inversión sostenida en sensibilización y desarrollo de capacidades en países-piloto. Finalmente, la TNJ-A produce informes de política con la intención de influir en la formulación de políticas a nivel internacional.

En lo que se refiere a la movilización de recursos, entre sus principales financiadores están la Coalición por la Transparencia Financiera, Christian aid, TJN, Diakonia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca; Trust Africa, Save the Children, Oxfam Novid, y Omydiar Network.

Con relación al encuadramiento interpretativo, aunque la TJN-A comenzó su trabajo siguiendo la huella de redes establecidas como la TJN y ATTAC también respondió a las necesidades y contextos específicos descritos anteriormente. En términos generales, el encuadramiento de la justicia fiscal se define alrededor de tres cuestiones interrelacionadas: si la justicia tributaria es lo mismo que la justicia fiscal; quien es su “guardián”; y cuál es el papel del activismo y de la red en la creación de sistemas tributarios más justos.

Con relación a la primera cuestión, hay una tensión entre los conceptos de justicia tributaria y justicia fiscal. De manera similar al caso latinoamericano, el debate sobre los impuestos no solo se enmarca en términos de justicia tributaria, sino que también incorpora la noción más amplia de justicia fiscal como incluyendo la justicia presupuestaria. La justicia fiscal también se interpreta en términos de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los derechos fundamentales que los Estados no pueden garantizar debido a la evasión fiscal, la corrupción y la amplia adopción de impuestos indirectos. En años recientes la noción de justicia fiscal en la región también paso a asociarse a las dinámicas de género.

En lo que se refiere a la cuestión de que quién es responsable por otorgar justicia fiscal, para contestarla hay que considerar las expectativas de los diferentes actores y cómo estas modelan lo que se considera como un impuesto justo a ser pago por el ciudadano



y recibido por el Estado. Esta dimensión, que se puede llamar "el significado social de los impuestos" (Duca, 2018), es afectada por las diferentes formas en que ciudadanos e instituciones conciben la "gestión y cuidado del bien común".

Finalmente, el encuadramiento dado a la justicia fiscal a nivel nacional varía mucho dependiendo de la situación política de los países. Para responder a pregunta sobre el papel del activismo fiscal en la promoción de la justicia fiscal, debe tenerse en cuenta que el encuadramiento dado a la justicia fiscal a nivel nacional también varía mucho dependiendo de la situación política de los países. Existe una gran disparidad entre países y dentro de los mismos debido a conflictos internos (i.e Boko Haram) protestas y transiciones (i.e Primavera Árabe). Esto desafía la reproducción exitosa del trabajo de incidencia realizado a nivel regional en el nivel local.

Bibliografía

Christensen et al. (2005) "Tax Avoidance, Tax Competition and Globalisation: making tax justice a focus for global activism", in: Penttinen, J; Sorsa, C.P.; Ylone, M. *More taxes! Promoting Strategies for Global Taxation*. Finland: ATTAC Finland.

Duca, F. (2018). *Towards a Holistic Understanding of Tax: Unpacking the social meaning of taxes in Cameroon to foster tax awareness*, ATRN working paper 03, November 2018

Guimarães, Alice Soares (2019). "La Justicia Fiscal en Debate: aportes desde la perspectiva de Género". *Revista Umbrales*, v.36 (forthcoming).

Huntington, S. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.

Leaman, J. and Waris, A. (2013). *Tax Justice and the Political Economy of Global Capitalism, 1945 to the Present*. New York and Oxford: Berghahn Books.

Meyer, J.; Boli, J. and Thomas, G. (1987): *Institutional Structure: Constituting State, Society and the Individual*. SAGE Publications.

Ruggiero, V. (2002). "Attac: a global social movement?" *Social Justice*; 29, 1/2

Tarrow, S. (2005). *The New Transnational Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, C. (2004). *Social Movements: 1768-2004*. Paradigm Publishers, LLC.



Línea Temática 8

La importancia de la formación /
educación en el campo popular



A participação dos Movimentos Sociais na Construção da Universidade Popular: Uma análise da experiência da Unilab

Leandro Proença
Pedro Rosas

Resumo

A Universidade Popular é um conceito em construção, que pode ser empregado para descrever o projeto de algumas universidades federais criadas recentemente no Brasil, dentre as quais destacamos a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira (UNILAB). Neste trabalho, nos propomos a analisar a presença de diversos movimentos sociais no cotidiano da UNILAB, sobretudo a partir da observação participante de dois docentes da universidade em disciplinas e projetos com a participação de militantes desses movimentos, bem como a presença da comunidade universitária nos espaços desses movimentos de luta pela terra, por moradia digna, por demandas de reconhecimento, e tantos outros. Este trabalho se insere no âmbito de uma pesquisa em andamento sobre o tema da universidade popular, e interessa-nos, sobretudo, verificar, e defender, o argumento de que essa relação não é somente desejável, mas fundamental para a defesa de uma universidade que seja, além de pública, gratuita e laica, popular no sentido que estamos desenvolvendo aqui: que contemple a presença do povo e que busque uma formação que atenda as demandas de um projeto popular.

Palavras chave

Universidade popular; Educação popular; Movimentos sociais.

Introdução

É lugar comum, pra defender a importância da universidade, argumentar em favor do fato de que ela é, ao lado da igreja, uma instituição milenar, que tem sobrevivido a uma grande variedade de contextos históricos. Esse fato ressaltaria a importância dessa instituição desde sua autonomia e vanguardismo, cumprindo a importante função de fornecer à sociedade conhecimentos que fundamentem bases sólidas para seu desenvolvimento. Não seria possível apresentar aqui nem mesmo uma breve síntese histórica da universidade, mas pretendemos apenas ressaltar esse aspecto sempre presente nos argumentos em sua defesa, o que ela deve ser pública, laica e gratuita.



Uma questão nem sempre enfrentada, porém, é a relação da universidade com as classes populares. Já marcamos aqui nossa defesa de uma universidade que além de pública, laica e gratuita, esta deve ser também popular, e iremos procurar dialogar com algumas das características principais deste conceito ainda em construção.

A questão sobre quem se serve da universidade e a quem a universidade serve nos remete à problematização sobre sua “vocação” histórica de servir a interesses das classes dominantes. A universidade tem sido historicamente uma instituição anti-povo, e desconstruir isso anima a construção da universidade popular. Isso traz, por certo, desdobramentos que não se limitam somente ao perfil de seu público, mas também a questões epistemológicas, didáticas, metodológicas, políticas e axiológicas, dentre outras.

Tomamos aqui como centro de nossa abordagem o caso da Universidade da integração internacional da lusofonia afro-brasileira – UNILAB que, somada a outras experiências, procura concretizar o projeto de uma universidade popular. Criada em 2011, durante o governo Lula, faz parte de um conjunto de universidades criadas sob forte articulação dos movimentos sociais, que inclui também a Universidade Federal da Integração latino-americana – UNILA, e a Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA.

Unilab e Unila, especificamente, também são universidades construídas a partir de diretrizes como a cooperação internacional Sul-Sul e o atendimento a demandas concretas dos países parceiros e dos lugares onde foram implantadas, no interior do Brasil. No caso da Unilab, a cooperação internacional se dá entre Brasil, Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Portugal.

Universidade, Educação Popular e Movimentos Sociais

O surgimento e o desenvolvimento histórico da universidade – apesar do constante esforço de fazer com que esta instituição represente um reduto para a prática do livre pensamento e da crítica – estiveram ligados às relações de poder em sociedades pautadas pela desigualdade social, restringindo seu acesso às elites e direcionando seus esforços aos interesses de quem a financia. Tragtenberg (1974) dirige pesadas críticas à postura que ele chama de delinquência acadêmica: a adequação aos interesses dominantes que instrumentalizam a universidade e destroem o exercício da crítica radical. Os e as profissionais da educação acabam dirigindo seus esforços a servir à burocracia acadêmica e a lógica que ela impõe para controlar a produção acadêmica do conhecimento.



Convencionou-se chamar de tradicional um modelo de universidade já consolidado pelas experiências históricas, e que serve de instrumento de manutenção de estruturas de dominação, independente dos modelos históricos; a questão é eminentemente política: a quais interesses a universidade serve? A produção de conhecimento voltada às demandas do complexo bélico-industrial e a rígida seleção de seu público promovem desenvolvimento técnico-científico ao mesmo tempo em que mantém a estrutura social de divisão e exploração de classes.

É nesse contexto que situamos a universidade popular como resultado dos tensionamentos provocados pela reivindicação dos movimentos sociais no campo da educação e sua presença nas universidades. Essa presença tem se dado de várias maneiras, seja como parte de movimentos sociais e políticos que compreendem a educação como um importante campo de disputa, seja também como objeto de estudo das ciências sociais.

Em diálogo com as questões da educação, todavia, nem sempre se compreende as ações nesses espaços não formais de ensino e aprendizagem em relação à natureza própria da educação mesma. Interessa-nos, aqui, justamente pensar os impactos dos diálogos com movimentos sociais a partir de seus aspectos epistemológicos e didáticos, na perspectiva da concepção própria da educação, no contexto da universidade popular. Este termo remete a um conceito ainda em construção, principalmente quando nos referimos à universidade em seu sentido mais restrito, vinculado à educação formal. Há, evidentemente, um aparente contrassenso, uma vez que o próprio conceito de educação formal é construído para marcar seu uso instrumentalizado à serviço dos interesses dominantes. Na tentativa de resolver esse problema, recorreremos à elaboração crítica que Carlos Rodrigues Brandão fez sobre o campo da educação popular a partir de sua discussão conceitual. Para isso, ele explora quatro sentidos diferentes de seu uso: “1) como a *educação da comunidade primitiva* anterior à divisão social do saber; 2) como a *educação do ensino público*; 3) como *educação das classes populares*; 4) como a *educação da sociedade igualitária*”¹. Brandão esclarece que alguns desses sentidos são pouco usuais, mas jogam luzes interessantes sobre o debate. Re- inverte a ordem pouco questionada de que primeiro teria surgido a escola excludente para que depois pudesse se pensar na educação das pessoas excluídas da – e na – escola.

A educação na comunidade que não conhece a divisão das classes sociais é, essencialmente, uma educação popular, no sentido de que toda a comunidade se



enquadra no conjunto denominado de *povo*, e o saber ali produzido está a serviço do próprio povo. Não existe, naquele contexto, uma educação formal, escolar, o que não significa dizer que a educação é algo ausente. É a divisão social do trabalho, e consequentemente a divisão social do poder, e do saber, que torna necessário o advento da escola, como o lugar privilegiado do saber teórico separado do trabalho; lugar destinado, portanto, a quem era liberado do trabalho. O advento da escola reproduziu a desigualdade social destinando aqueles e aquelas que por ela passavam ao exercício do poder e aqueles e aquelas que dela eram excluídos à exploração de seu trabalho, realidade que não foi alterada substancialmente por longo período de tempo. Povo, naquele contexto, já não significava a totalidade da comunidade, mas, na expressão da democracia grega, aqueles que tinham o privilégio do exercício do poder.

São os ideais iluministas – liberais-republicanos – que promovem a expansão da escola para o povo, na ideia de povo pensado enquanto classe. A educação do povo era necessária como parte do projeto político de construção de um estado emancipado de poderes absolutistas, e, nesse sentido, pensada de cima para baixo, por “educadores e intelectuais de gabinete”, que assumem para si a tarefa de pensar o que é o melhor para o povo. É nesse sentido que a escola pública torna-se o lugar para a educação do povo, seja como princípio de um projeto civilizatório, seja, mais explicitamente, por meio de seu sucateamento.

Contraposto a essa função da educação pública, os movimentos sociais das classes populares desde sempre desconfiaram dos benefícios que a educação formal poderia promover-lhes. Nesse sentido, a educação popular surge como oposição à própria educação formal, como forma de negar seu projeto anti-povo e de afirmar os próprios projetos de emancipação das classes populares por meio do próprio povo.

Todavia, é necessário problematizar a respeito das possibilidades de se fazer educação popular no âmbito das instituições de educação formal, como a universidade. É nesse contexto que os movimentos sociais conseguiram avançar bastante, assumindo papel protagonista na construção de escolas e projetos dentro das universidades. Nos referimos à construção das escolas diferenciadas, como a escolas do campo, as escolas indígenas e as escolas quilombolas; nos referimos também à construção de licenciaturas que atendam as demandas específicas dessas escolas diferenciadas, e que já foram ofertadas em várias universidades; além de outros convênios e acordos, sempre mediados pelos movimentos sociais, por meio dos quais já foram ofertados



vários cursos de bacharelado e licenciatura para grupos específicos a partir de demandas dos próprios movimentos.

No contexto da educação superior, essas articulações culminaram na construção de três universidades que assumiram, experiências que assumiram, cada qual em seu contexto, demandas específicas de movimentos: os movimentos sociais do campo, no caso da UNIPAMPA; o movimento indígena e latinoamericanista, no caso da UNILA; e o movimento negro e africanista, no caso da UNILAB. A seguir, nos esforçaremos para apresentar fundamentos ao conceito de universidade popular de forma que possamos compreender a trajetória da Unilab em relação a ele.

Podemos falar de universidade popular em algum dos três últimos sentidos discutidos por Brandão a respeito da educação popular. As experiências recentes no Brasil remontam à expansão da oferta das vagas no ensino superior e do acesso à universidade, pública e privada. Todavia, é preciso considerar que promover acesso ao ensino superior formal e/ou ao conteúdo desta educação, sem promover ao mesmo tempo uma crítica à estrutura e à dinâmica desta instituição e às formas e critérios que estruturam e legitimam seu saber pode provocar o risco de que o projeto não se concretize nem como universidade e, muito menos, como educação popular.

Seria preciso compreender, na perspectiva de Paulo Freire, a universidade popular como parte de um processo do projeto político de transformação social por meio da cultura, entendida de modo dinâmico, composta de elementos concretos e simbólicos, na qual o ser humano é produzido, produz e se produz². Nas relações de dominação entre classes sociais desiguais, a cultura é apropriada como ideologia da classe dominante e disseminada como valor universal, e por isso imposta às pessoas oprimidas. Dentro dessa lógica, as possibilidades de uma educação libertadora são bastante limitadas pela concorrência com outros modos mais fortes de inculcação da ideologia. A educação libertadora faz mais sentido no âmago das transformações de processos culturais nos quais a cultura do povo alcança a condição de ser humanizadora, expressão de relações de dignidade e liberdade, nas quais as pessoas se reconhecem enquanto seres humanos que estão sendo e se produzindo juntas e em condições de igualdade. Diferente disso, até mesmo projetos de “educação popular” ou “educação libertadora” não seriam mais que mero assistencialismo, educação e cultura *para* o povo. Como ressalta Miguel Arroyo,

Os coletivos em seus movimentos vêm lutando por igualdade de direitos e de serviços sociais, porém criticam as limitações dessas políticas. Não apenas porque seus efeitos



igualitários são escassos, lentos, mas por secundarizar a centralidade na história de nossa formação das desigualdades de classe, de etnia, raça, gênero como legitimadores da negação dos direitos à terra, trabalho, renda, saúde, educação, moradia ou de acesso aos bens e serviços públicos (Arroyo, p.165).

É nesse sentido que os âmbitos da educação formal, não-formal e informal se misturam enquanto ações culturais para a liberdade, mas é evidente que a transformação da educação formal a partir dos pressupostos da educação popular torna-se uma das etapas mais importantes do processo, ao tirar da margem o lugar da cultura popular.

UNILAB: Uma experiência de Educação Popular

Compreendendo a Unilab como uma experiência de universidade popular, pretendemos aqui refletir sobre alguns dos aspectos que fundamentam essa conceituação. Algumas características são fundamentais, como o perfil dos e das ingressantes; a opção política pelas áreas e cursos de formação; e as opções epistemológicas. Além disso, remontaremos também a experiências pontuais em relação aos não menos importantes aspectos metodológicos.

O acesso à universidade tem sido historicamente negado às pessoas oriundas das classes populares. A formação tradicional, ou o sentido tradicional de formação consegue, no máximo, promover a ascensão social do indivíduo dentro da mesma estrutura de desigualdade. Ademais, formado dentro de um determinado sistema ideológico, os egressos tendem a atuar para a manutenção desta estrutura que os formou.

O rompimento com essa lógica já está presente, de certa forma, no processo de expansão e interiorização das universidades públicas. A instalação de universidades ou campus acadêmicos nos interiores do país promove acesso a pessoas que, sem essa política, dificilmente frequentariam a universidade.

No caso, da Unilab, todavia, foram propostas que puderam avançar mais profundamente, ao menos enquanto projeto. Suas diretrizes previam que metade do corpo docente e discente (silencia quanto a demais funcionários) fosse proveniente dos países parceiros, apesar de isso nunca ter se realizado. A maior parte dos brasileiros e brasileiras discentes é da região do Maciço do Baturité e das regiões periféricas de Fortaleza.



As áreas de formação, tais como pensadas pelas diretrizes, são bastante significativas, elaboradas a partir de prioridades definidas pelas demandas das regiões com as quais exerce cooperação e onde está inserida: 1) Produção de alimentos, na perspectiva da agroecologia e em oposição ao agronegócio; 2) Saúde coletiva, na perspectiva da saúde popular, com atenção à sanidade humana e animal; 3) Formação de professores, na perspectiva de criação e qualificação de quadros para a atuação na educação básica, seguindo princípios da diversidade e da pluriculturalidade; 4) Gestão pública, diferente dos bastante badalados cursos de administração de empresas; 5) Tecnologias e Desenvolvimento Sustentável, buscando promover condições de infraestrutura tecnológica a partir das características de cada região, ao invés de tecnologia que sirva somente aos ditames da agenda neoliberal³.

Do ponto de vista pedagógico, o paradigma da interdisciplinaridade ganha centralidade como fio condutor de uma concepção epistemológica construída em oposição àquela caracterizada pela ideologia da dominação, exploração e colonização que marcaram o surgimento e o avanço da ciência moderna. Além disso, procurou jogar luzes aos objetos a serem estudados, a partir das realidades até então ignoradas pelo saber dominante, tomando os processos do conhecimento como aquilo que são, meios e não fim em si mesmos. Não se trata apenas de conhecer a história e a realidade dos lugares marginalizados e explorados, o que já seria um avanço, mas conhecer a partir destes lugares, e a partir daí produzir saberes e práticas transformadoras.

A implementação e o desenvolvimento dessas diretrizes não seguiu totalmente a proposta, e as disputas políticas e ideológicas marcam relações de poder que aproximam ou afastam seus projetos políticos dos pressupostos da universidade popular, e interessa-nos justamente compreender esses obstáculos, desafios e possibilidades.

Uma das características centrais do paradigma da universidade popular, naquilo que é possível formular a partir de Paulo Freire, por exemplo, é exatamente a dimensão pedagógica. Tal dimensão excede bastante a relação docente-discente, e está presente em todas as relações travadas *em* e *a partir de* seus espaços. E relações são aprendidas. Há uma certa arrogância, paralela a uma certa subalternidade, que marca muitas das relações de ensino-aprendizagem. A ideia de que a universidade presta um favor às pessoas das classes populares que recebe é equivocada e prepotente. É muito comum, por exemplo, o uso do discurso de que o Brasil tem uma dívida com a África, e



que a Unilab é uma das formas de pagar essa dívida; tal discurso sustenta ideologias neocolonizadoras, começando pelo próprio princípio de relação desigual.

Além disso, a construção de novos espaços e relações que não descaracterize aquilo que esta instituição deve ser de fato – uma universidade, a saber – parece ainda mais problemática. Porém, trata-se, sobretudo, de uma concepção de universidade a ser afirmada. Nos debates que marcam as disputas pela concepção de universidade que se está construindo, simplificadas na oposição universidade popular x universidade tradicional, é comum fazer-se menção ao *projeto* da Unilab. O fato é que essa expressão acabou se transformando em uma espécie de *chavão*, abrangendo qualquer coisa diferente do modelo tradicional de universidade. O *projeto*, neste caso, é fragilizado, tornado mera abstração. Porém, é possível falar de projeto num sentido utópico, como referência. É o que propõe o conceito de universidade popular. Defendo aqui o elemento da *utopia*, enquanto essencialmente político. O motivo de termos nos concentrado aqui nas Diretrizes da Unilab em detrimento de outros documentos oficiais é o mesmo que leva esse documento a ser reiteradamente negado, sob o argumento que diretrizes não tem caráter normativo. Para essa função, há estatuto, regimento, PDI, resoluções, etc. As diretrizes serviriam para estabelecer horizontes a partir dos quais os objetivos e as metas serão traçados e definidos nos documentos normativos. Todavia, normas muito mais regulam ações do que alimentam práxis. Nesse sentido, a discussão sobre os elementos utópicos que animam os projetos de universidade em disputa parece ter a sua importância. Sobre algo parecido, diz Milton Santos: “A fidelidade reclamada não pode ser à universidade, e a ela não temos razão para ser fiéis. Nossa única fidelidade é com a ideia de universidade. É a partir da ideia sempre renovada de universidade que julgamos as universidades concretas e sugerimos mudanças” (Santos, p. 168).

Considerações finais

Consideramos fundamental a oportunidade de vivenciar e aprender com as experiências promovidas a partir das interações com os movimentos sociais na universidade e seu objetivo de contemplar as demandas desses movimentos, ao mesmo tempo em que encontra ou descobre vitalidade nas suas reinvenções e ressignificações necessárias para que isso ocorra. Temos tido experiências diversas a partir da presença fortemente marcada desses movimentos, e principalmente dos desdobramentos que isso traz, tanto no sentido de potenciais para o trabalho pedagógico, mas também pelos tensionamentos provocados por isso.



Tem-se, normalmente, e com razão, que a universidade pública, como serviço de educação prestado pelo estado, deve servir ao povo, e parte disso contempla ao atendimento às demandas dos movimentos sociais. Nossa experiência têm demonstrado também que a universidade se serve com grande vigor das contribuições que recebe desses movimentos e das articulações construídas com eles, de maneira a não se afastar do horizonte utópico de sua função crítica e emancipatória, tão necessária principalmente em tempos de retrocesso como este em que nos encontramos.

Notas

¹ Brandão, Carlos Rodrigues. *O que é educação popular*. São Paulo: Brasiliense, 2006.

² Ver Jarbas Maciel (1983) sobre a elaboração do conceito de universidade popular em Paulo Freire e sua experiência desenvolvida na UFPE.

³ Diretrizes gerais da Unilab, p. 14-16.

Referências bibliográficas

Almeida, Danilo Di Manno de. Uma ética para o corpo: cidadania e educação transformadora. Em: Almeida, Danilo Di Manno de (org.). *Corpo em ética: perspectivas de uma educação cidadã*. São Bernardo do Campo: UMESP, 2002.

Arroyo, Miguel. *Outros sujeitos, outras pedagogias*. 2ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2014.

Bauer, Carlos; Roggero, Rosemary; LORIERI, Marcos Antônio (orgs.). *Pedagogias alternativas*. São Paulo: Paco, 2104.

Brandão, Carlos Rodrigues. *Paulo Freire: a educação, a cultura e a universidade*. Memória de uma história de cinquenta anos atrás. EJA em Debate. Florianópolis, ano 3, n.4. jul.2014. pp.57-74.

_____. *O que é educação popular*. São Paulo: Brasiliense, 2006.

_____. *O que é educação*. São Paulo: Brasiliense, 1991.

Cássio, Fernando (org.). Educação contra a barbárie: por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. São Paulo: Boitempo, 2019.

Chauí, Marilena. *A universidade operacional*. Folha de São Paulo. Caderno Mais. São Paulo, 09/05/1999.

Davis, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo, 2016.

Freire, Paulo. *Pedagogia dos sonhos possíveis*. São Paulo: Unesp, 20012014.2014..



- _____. Freire, Paulo. *Política e educação*. 7ed. São Paulo: Cortez, 1997.
- _____. *Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido*. 3ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1994.
- _____. *Pedagogia do Oprimido*. 21ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- _____. *Educação como prática da liberdade*. 11ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
- Freire, Paulo; Nogueira, Adriano. *Que fazer: teoria e prática em educação popular*. 17ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2014.
- Galeano, Eduardo. *De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso*. Porto Alegre: L&PM, 2018.
- Gomes, Nilma Lino. *O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação*. Petrópolis/RJ: Vozes, 2017.
- Gramsci, Antônio. *Concepção dialética da História* 10ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1955.
- Hooks, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade*. São Paulo: Martins Fontes, 2017.
- Maciel, Jarbas. Fundamentação Teórica do Sistema Paulo Freire de Educação. Em: Favero, Osmar. *Cultura popular, educação popular: memórias dos anos sessenta*. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
- Novaes, Henrique T. *Reatando um fio interrompido: a relação universidade-movimentos sociais na América Latina*. São Paulo: Expressão Popular, 2012.
- Santos, Boaventura de Sousa; Meneses, Maria Paulo (orgs.). *Epistemologias do sul*. São Paulo: Cortez, 2013.
- Santos, Milton. O intelectual, a universidade estagnada e o dever da crítica. Em: Moraes, Dênis de (org.). *Combates e utopias: os intelectuais num mundo em crise*. Rio de Janeiro: Record, 2004.
- _____. *Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal*. 6ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001.
- Severino, Antonio Joaquim. *Filosofia na formação universitária*. São Paulo: Arte-Livros, 2011.



Streck, Danilo R., Redin, Euclides., Mädche, Flávia C., Keil, Ivete Manatzeder., Gaiger, Luiz Inácio (orgs.). *Paulo Freire: ética, utopia e educação*. 2ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

Tragenberg, Maurício. *A delinquência acadêmica: o poder sem saber e o saber sem poder*. São Paulo: Rumo, 1974.

Tavares, Maria Tereza Goudard; Alvarenga, Marcia Soares de; Silva, Catia Antonia da (orgs.). *Educação Popular, movimentos sociais e formação de professores: os 50 anos do golpe militar de 1964 e a mobilização de inéditos viáveis no campo social e educativo*. São Paulo: Outras Expressões, 2015.

UNILAB. Diretrizes Gerais da Unilab. Redenção: Julho/2010.



La Educación Popular en el movimiento social Levante Popular da Juventude en Pernambuco.

Marília Lima da Silva

Resumen

Este estudio busca comprender el significado que tiene la Educación Popular en el movimiento social Levante Popular da Juventude en el Estado de Pernambuco en sus formaciones, lo que aporta de novedad y lo que podría heredar. A la luz del momento histórico y la situación crítica en la que se encuentra la educación.

Palabras clave

Educación Popular; Movimiento social; Formaciones.

Introducción

Este estudio trae reflexiones tejidas en la investigación de la maestría (en proceso) de la autora. Busca explorar la Educación Popular (EP) en el movimiento social a partir de la experiencia del Curso Realidade Brasileira (CRB) 2011, en Pernambuco (PE), en la región metropolitana de Recife, Litoral Sur, Mata Norte y Agreste. La primera clase regional del CRB que culminó en la organización de jóvenes y originó el Levante Popular da Juventude (LPJ) en Pernambuco.

El CRB fue organizado por movimientos sociales como el Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) y la organización política Consulta Popular (CP), a principios de la década del año 2000, con herencias y contribuciones de sectores progresistas de la iglesia católica que representaban una fuerza importante de la Teología de la Liberación en el proceso de organizar a los y las trabajadores, a través del perseverante trabajo de base en barrios populares, buscando autoorganizarse para combatir la injusticia.

Neto (2007), afirma que *“na América Latina, o movimento religioso vinculado às lutas populares, que buscou, nas análises socialistas e no marxismo, escopo material para as suas análises sociais e econômicas, ganhou força nas organizações populares do campo e esteve na origem do mais importante movimento social do Brasil: o (MST)”* (p. 331).

Durante la construcción de resistencia, los movimientos sociales señalaron la necesidad de construir un proyecto alternativo para Brasil y era fundamental que los movimientos reflexionaran sobre la formación social de nuestro país, a través de la reflexión de dónde



venimos y hacia dónde queremos ir y lo que hay que hacer. Sin embargo, para reflexionar sobre nuestra historia necesitaríamos un esfuerzo colectivo de construcción social.

Es en esta coyuntura histórica que el Curso Realidade Brasileira hace su propuesta como un espacio de formación que pudiera reunir movimientos sociales, estudiantes, trabajadores (as), miembros de la sociedad civil para estudiar la realidad social brasileña en sus aspectos políticos, económicos y socioculturales, a fin de calificar las luchas.

En este estudio se hacen presente elementos importante como la mística, los estudios teóricos y prácticos, el tiempo comunitario, la división de los Núcleos de Base (NB's), los momentos culturales y también la dinámica de organizarse individualmente para estar presente en el estudio y la práctica colectiva (auto-organización).

Muchos jóvenes después de participar en el CRB y en otras acciones y colectivos se organizaron para participar en el “I Acampamento Nacional de Levante Popular da Juventude”. Las delegaciones se comprometieron a regresar a sus estados con el compromiso de construir el movimiento. De ahí el interés en estudiar el significado del CRB em PE, porque, como se interpreta, esta acción formativa ha causado inquietud en los (as) jóvenes, en cuanto a la necesidad de organizarse colectivamente para construir transformaciones sociales a favor de la clase trabajadora. El LPJ fue construido con coraje, audacia en acciones agitadas, lo que suscitó una forma de organización que involucró a la juventud.

Fundamentación Teórica

Coordinado por organizaciones populares vinculadas a la izquierda política y al campo popular, con característica itinerante, las etapas del curso sucedieron los fines de semana, un fin de semana de cada mes, en asentamientos del MST, sedes de movimientos sociales, universidades y entre otros lugares con estructura y capacidad para realizar las actividades.

De acuerdo con Silva (2012), se indica lo siguiente:

“nos estudos teóricos para compreensão da realidade pernambucana, utilizaram escritos de pensadores (as) como Paulo Freire, Florestan Fernandes, Sérgio Lessa, Caio Prado, Frigoto, Ana Fani Alessandri Carlos, Ermínia Maricato, João Pedro Stédile, Tânia Barcellar, José Vasconcelos Sobrinho, Carlos Walter, José Paulo Neto e Karl Marx. As etapas são divididas em temas específicos como: introdução à crítica da economia política; a questão agrária; formação econômica do Brasil, projeto popular para o Brasil,



dentre outros, o qual abordam a exploração capitalista, estado e ideologia, as classes sociais no campo, a concentração fundiária e suas consequências, desenvolvimento e subdesenvolvimento, a formação das classes sociais no Brasil etc (p. 2)

La mística, contribuye en la forma de celebrar y cultivar la memoria, los sueños y la cultura a través de símbolos y elementos que marcan la existencia del pueblo brasileño. Podemos decir que es un ritual que trabaja la subjetividad, la afectividad y la sensibilidad de las personas. Creemos que es necesario involucrar a las personas, enseñar cómo cultivar un nuevo proyecto de sociedad a través del cuidado a los (as) demás, el afecto, elementos presentes en la acción práctica proveniente de los sectores progresistas de la iglesia católica. El tiempo comunitario, el momento de la acción comunitaria, ocurrió donde se estaba desarrollando la fase del curso, generalmente una visita a algún espacio de lucha y resistencia. Otro elemento de la organización juvenil es la división de los NB's, cada NB es nombrado por sus miembros, generalmente reciben nombres de luchadores (as) del pueblo y cada grupo se hace responsable de realizar alguna actividad de construcción del espacio, cuidar de la limpieza, la mística, la cultura, las madrugadas (despertar de los miembros temprano) y otras demandas.

Asimismo, Silva (2012) rescata lo *“Instrumentos para possibilitar diálogos de saberes entre os movimentos sociais e a academia, contribuindo para o fortalecimento de pessoas e das organizações populares como a Assembleia Popular, o MST, a Rede de Educação Cidadã (RECID), a CP, Associação de bairros, como o do Cabo de Santo Agostinho, dentre outras”*. (p. 2)

El LPJ se formó en 2005 en Rio Grande do Sul, resultado del trabajo de movilización de algunas organizaciones vinculadas a Via Campesina, como el MST, la Pastoral da Juventude Rural (PJR) y la CP. Se identificó la necesidad de fortalecer el proceso de organización juvenil, organizar una juventud vinculada a estos movimientos para construir juntos el proyecto de transformación de la realidad brasileña y específicamente el de la juventud urbana, ya que en el campo existían procesos de organización, pero poco activos en relación al área urbana.

El zine preparado para la presentación del movimiento en el primer campamento nacional escribe el porqué de la denominación “Levante Popular da Juventude”, del cual se destaca:

Por que somente um “Levante” para acabar com as desigualdades, violências e opressões. Um movimento de organização “Popular” referindo a grande parcela do povo brasileiro que sofre diariamente com a desigualdade e também, remetendo ao campo



político de ideas e de ação conjunta, que busca dar coesão a setores identificados politicamente de atuação do movimento, o qual é o Campo Popular. E que esse “Levante Popular”, seja da “Juventude”, pois mesmo em momentos de conformação social a juventude é uma categoria dinâmica, heterogênea, questionadora, e, além disso, é uma das parcelas que mais sofre com os efeitos das estruturas de poder atuais, e tem como perspectiva um futuro incerto. Um movimento configurado como uma ferramenta de organização de jovens militantes voltada para a luta de massas em busca da transformação da sociedade, através da construção de um Projeto Popular para o Brasil. Projeto este criado por organizações do seu campo político e não em suas instâncias deliberativas (Levante Popular da Juventude, 2012, p. 4,5 e 11).

El Proyecto Popular para o Brasil (2011) de acuerdo con la cartilla de la asamblea popular indica que es un proyecto “*em construção permanente onde se deve estimular o trabalho de base, a formação militante e as ações conjuntas para a transformação de nossa sociedade. E busca construir unidade e força social para a transformação profunda das relações de produção*” (p. 6-7).

También considerado como un logro de las reclamaciones históricas que siempre han sido negado por la élite brasileña, como educación, salud, transporte, cultura, deporte y ocio para la clase trabajadora, una lucha por ser de carácter público y de calidad. En la educación, la alternativa es construir un proyecto de transformación profunda que satisfaga los intereses de la mayoría de la población, un sistema que cumpla con las demandas sociales, como el “Proyecto Popular para a Educação”.

El propósito de LPJ de acuerdo con las lecturas de sus documentos es organizar a los jóvenes para que formen conciencia de su historia y de la realidad que los rodea para transformarla.

El “I Acampamento Nacional do Levante Popular da Juventude”, actividad de nacionalización del movimiento, que reunió a unos 1200 jóvenes de 17 estados brasileños en la ciudad de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul en febrero del 2012, organización juvenil en todo Brasil que también dialoga con movimientos juveniles latinoamericanos. En este, se elegía un (una) representante de coordinación nacional de cada Estado participante del campamento, específicamente se desafió a los jóvenes para regresar a sus ciudades y crear células del Levante con la premisa organizacional para la construcción de la fuerza social, que se basa en: “*organização, formação e luta*”. También se señaló que la militancia debería organizar campamentos estatales y municipales para atraer nuevos (as) militantes.



El eje, *organização* se lleva a cabo desde tres frentes: a) frente estudiantil, con estudiantes de secundaria y universitarios; b) frente territorial, en las periferias (es decir, cercanías) de centros urbanos; c) frente campesina, con sectores campesinos. Este frente de acción está compuesta por la juventud de algunos movimientos sociales, como la PJR, MST, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) y el Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM). El Levante también se compone de jóvenes que construyen otros movimientos sociales que creen en la construcción del “*Projeto Popular para o Brasil*”, no solo en los frentes, sino también en los colectivos, como se explicará a continuación.

El eje, *formação*, trabajado por el movimiento de carácter informal y formal, a menudo itinerante, es muy amplio en el LPJ, las formaciones son conducidas por ámbitos nacional, regional, estatal, local, organizadas por sectores, colectivos, frentes de lucha y células, donde los jóvenes en el LPJ están presentes y organizados. El movimiento trabaja con la realización de cine debates, talleres en diversas áreas del conocimiento, acciones de agitación y propaganda, y campamentos.

El eje, *luta*, objetiva enfrentar lo que el movimiento entiende como opresiones, en este caso, el "sistema capitalista-patriarcal-racista y homofóbico, que crea una relación de dominación entre culturas y pueblos, destruye el medio ambiente, aprisiona y mata los animales, oprime, explora y mata a las mujeres, los negros y las negras, también las personas de la comunidad LGBTs (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Transgéneros) y restringe los sueños diarios de la clase trabajadora. Se entiende que solo la lucha del pueblo es capaz de construir un proyecto de nación diferente, que se superpone a los intereses de la burguesía, pequeña parte de la población que explota y domina a la mayoría.

Paludo, Santos e Taddei (2016), sostienen que “*a CP e a Via Campesina apresentam como um dos seus pilares formativos a Educação Popular- EP. O Levante no estado do Rio Grande do Sul manteve o objetivo inicial, posto por estas entidades, de reunir jovens do campo e da cidade em torno de um Projeto Popular de sociedade, e esse foi o elemento que manteve sua identidade com os movimentos sociais que foram à fonte de sua origem*” (p. 15).

Además de la inserción de la militancia en los CRBs, en Pernambuco, se creó la Escuela de Formación del LPJ - Alexina Crespo en 2015.



Sin embargo, ¿es la formación del Levante juvenil movilizador para una experiencia típica o un replanteamiento para pensar y construir la Educación Popular en la actualidad?

Fue a partir de esta problemática y considerando los límites reales y prácticos de la investigación que el objetivo general del artículo es investigar el significado que tiene la Educación Popular a partir de las experiencias del Curso Realidade Brasileira en el movimiento social Levante Popular da Juventude en Pernambuco.

La Educación Popular

La historia de la Educación Popular en América Latina presenta prácticas formativas caracterizadas por una metodología basada en la participación popular, en el intercambio de experiencias a través de la reflexión, del diálogo, de la convivencia, democratización de las prácticas político-pedagógicas, los movimientos corporales insertados en los métodos de aprendizaje y entre otras prácticas que las caracterizan.

Saviani (2007) presenta que *“a expressão “Educação Popular” no início da Primeira República, estava associada à característica de popularizar o saber, difundi-la a toda a população, ou seja, tornar pública a educação. Neste mesmo período ele expõe que as ideias pedagógicas contra hegemônicas foram também desenvolvidas pelo movimento operário. A Educação Popular assume então o sentido de educação do povo, pelo povo e para o povo, para superar o sentido anterior de um conhecimento restrito”* (p. 317).

La EP como práctica latinoamericana nació en España alrededor del siglo XIX y estuvo relacionada con los movimientos de construcción de procesos de resistencia en las repúblicas sudamericanas.

En la primera mitad del siglo XX, durante el período de la “Escola Nova”, el discurso del liberalismo pedagógico moderno decía que la Educación Popular era lo mismo que la Educación Básica, Estatal y Universal. Esta concepción condujo a un sistema educativo que produjo circuitos desiguales de educación. En este contexto, surgieron muchas prácticas que intentaron contrarrestar la manipulación creada por este proceso educativo liberal.

Mientras, en Recife, la capital de Pernambuco, precisamente en los años sesenta, cuando el alcalde del municipio era Miguel Arraes, hubo una movilización cultural con la participación de diversos segmentos, intelectuales, estudiantes, artistas populares, trabajadores (as). El Movimiento de Cultura Popular (MCP) en Recife/PE, movimiento de formación, ha ganado adeptos, con el tiempo hubieron cambios, especialmente en



América Latina, en línea con las demandas a partir de las cuales se está desarrollando, diferentes concepciones teóricas y diferentes prácticas.

De acuerdo con Streck quien cita a Streck e Esteban, (2013), entendemos que:

A educação popular está umbilicalmente vinculada aos movimentos sociais populares. Ela é uma pedagogia do movimento no sentido de se integrar às lutas de quem busca construir novos territórios para viver e conviver. [...] ela é uma pedagogia em movimento [...] ela corresponde à diversidade de tempos e de culturas que constituem o campo das práticas educativas (p. 363).

Así, entendemos la Educación Popular como una concepción educativa, como una acción global, como un fenómeno latinoamericano. Consolidándose en Brasil en los procesos de luchas y resistencia de las clases populares, entre 1930 y 1960, en un período de redemocratización política.

Después de la dictadura civil militar brasileña, se observa que

a análise marxista, ainda que com diferentes matizes, sustentava que a educação reproduzia as relações econômicas e socioculturais mais amplas. Como fontes teóricas, também se constatou a importância de autores latino-americanos, como Martí, Mariátegui e Paulo Freire; as matrizes da Teologia da Libertação; do sindicalismo; a indigenista; dos movimentos urbanos, rurais e comunitários; do socialismo; da revolução; das artes, com o Teatro do Oprimido; e a da comunicação. Constituído por ênfases e tendências diferenciadas, esses campos de forças políticas e culturais realizavam o exercício da contra-hegemonia, orientados por utopias da transformação social, cujos movimentos sociais populares, além de se constituírem no processo, tornaram-se sujeitos fundamentais. O “movimento de Educação Popular” se fez no interior desse processo, na direção da construção de fazer do povo expressão política de si mesmo, por meio de organizações populares autônomas, imbuídas do desejo de construir o “poder popular” (Paludo, Santos e Taddei, 2016, p. 555, 556).

Para Paludo (2016), es entiende que es en el interior de este “Movimento de Educação Popular”, acontece el “movimento político e sociocultural mais amplo”, o qual se tece a “concepção de Educação Popular” e esse mesmo “Movimento” também se constitui como formador, porque propicia na dinâmica política e organizativa dos diferentes movimentos sociais, a vivência concreta de outro modo de relações sociais e de compreensão da realidade. (p.556) y del cual se agrega como “[...] uma experiência em que alguém, a princípio, era de uma maneira, ou não era nada, pura indeterminação, e, ao final, converteu-se em outra coisa. Trata-se de uma relação interior com a matéria



de estudo, de uma experiência com a matéria de estudo, na qual o aprender forma ou transforma o sujeito” (Larrosa, 2010, p. 52).

Observamos que formar en los jóvenes esa perspectiva de que se expresen políticamente, se organicen, sientan en la piel, las contradicciones que existen en cada uno y en la sociedad, que el LPJ organiza a los (as) jóvenes que pertenecen a la clase trabajadora o quienes se reconocen en esta clase social en el movimiento para educarlos (as) sobre la historia de su gente, sus orígenes, para transformar potencialmente sus vidas, vinculando el aprendizaje con la práctica del cambio social en su proceso formativo.

Caminos Metodológicos

En la comprensión de que los seres humanos son sociables, constantemente sujetos a cambios, y sus vidas son procesos y resultados de construcciones sociales e históricas, así como la presentación de la realidad, incitando aproximaciones de particularidades, singularidades y totalidades, optamos por el enfoque cualitativo a través del materialismo histórico por la “[...] *relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A análise e a interpretação dos dados são o instrumento-chave para a pesquisa qualitativa*” (Gil, 1996, p. 32).

Poniéndonos desafíos de observar, comprender, analizar y escribir sobre una realidad dada reconociendo que este no es un proceso lineal y, por lo tanto, requiere sensibilidad en la percepción de los matices que se desarrollan a lo largo del proceso.

Minayo (2000) refleja que el materialismo histórico

[...] representa o caminho teórico que aponta a dinâmica do real na sociedade, a dialética refere-se ao método de abordagem deste real. Esforça-se para entender o processo histórico em seu dinamismo, provisoriedade e transformação. Busca apreender a prática social empírica dos indivíduos em sociedade (nos grupos e classes sociais), e realizar a crítica das ideologias, isto é, do imbricamento do sujeito e do objeto, ambos históricos e comprometidos com os interesses e as lutas sociais de seu tempo. Como se pode perceber, esses dois princípios estão profundamente vinculados, naquele sentido já advertido (e citado anteriormente) por Lênin: “O método é a própria alma do conteúdo” (p. 64).

En la fase exploratoria, por el carácter del objeto de estudio, se reunirán los procesos de aprendizaje, lo cual tiene un carácter flexible, permitiendo el estudio del tema desde



varios ángulos y aspectos. Mediante encuesta documental y selección de bibliografía, textos impresos y en línea.

Para lo cual Rodrigues (2006) aporta:

“Inserir-se num trabalho que possui participação na metodologia é recolher-se na intimidade das lembranças e buscar reconstruir os passos, e assim, caminhar nas ruas da memória para reencontrar as cores dos momentos vividos no campo de estudo, as texturas dos documentos lidos e analisados, os sons das narrativas que deram o tom das entrevistas. É um caminhar para reconhecer procedimentos metodológicos a partir da reflexão teórica, das hipóteses, e, então, vão-se emergindo apontamentos de novos caminhos a serem investigados. Esta inquietação desperta a necessidade de dialogarmos com muitas fontes e autores a fim de fundamentar a análise do objeto de estudo. Encontrar proposições teóricas que indicam respostas acerca do pensamento em cheque para refletir sobre determinadas questões” (p.15-16).

Con vista a recuperar la dimensión de la educación que impregna los espacios institucionales, como un proceso de educación permanente en las relaciones y contextos sociales que no solo abarcan la práctica educativa como práctica social, sino que también se constituyen a través de sus múltiples actividades y contextos educativos.

Resultados

El LPJ surgió en un contexto y organización diferenciados de otros movimientos sociales de base popular. Concluimos que sus "pilares formativos" se heredan de su campo político, a través de las formaciones, buscando comprender las contradicciones sociales para responder a las necesidades de lucha en cada período y coyuntura, formando políticamente la militancia y la sociedad para reclamar servicios básicos que la población necesita.

La formación se lleva a cabo a partir de acciones nacionales, regionales, estatales y locales en diversos cursos, escuelas de formaciones y experiencias, creyendo que el proceso de organización y lucha, también lo forman sobre la realidad política, económica y social.

A partir de muchas actividades educativas populares, se iniciaron procesos de institucionalización de estas prácticas, muchas pueden considerarse incentivos para construir y ejecutar acciones, por ejemplo, el Curso de Realidade Brasileira, por medio de apoyo financiero como proyecto de extensión. No obstante, existen hay contradicciones en este proceso, en 2014 con el “Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas”, constituido en el gobierno de la presidenta Dilma



Roussef, consolidando la EP como política pública del gobierno federal, algunos intelectuales creen que este proceso también se utiliza para monitorear las relaciones pedagógicas y para ejecutar prácticas que no dialogan con el escenario actual, claramente fueron importantes durante un cierto período, pero que hoy se deben renovar.

Así como también, los espacios religiosos crecieron en la socialización y el reclutamiento de jóvenes en los siglos XX y XXI, que caracterizan nuevos conceptos y escenarios de los movimientos sociales en la política, con la fragmentación e individualización de las pautas.

Conclusión

La dinámica que existe en los espacios, a través de los núcleos formados por los (as) participantes, contribuye para el aprendizaje, intercambio de conocimientos, centrándose en los estudios, más el “Tempo Comunidade”, período en que se pone en práctica los conocimientos construidos durante el curso junto a la comunidad, los (as) educadores (as), educando, reflexionando los saberes, elaborando textos, utilizando datos concretos, sobre la realidad en la que se insertan como resultado práctico.

La mística también es un elemento importante, conmociona a las personas, despierta el espíritu revolucionario, la creatividad, rescata la unidad, el amor y el cuidado a sí mismo y al prójimo.

Toda la experiencia desarrollada reafirma la comprensión de que la teoría no está disociada de la práctica, ya que el objetivo principal del curso es transformar a las personas, agudizar su ojo crítico sobre la realidad, dotarlas de pensamiento, así como, percibir y respetar la diversidad fortaleciéndolos como agentes de transformación.

Los movimientos sociales desempeñan un gran papel en la formación y prácticas, formando una juventud consciente de su historia y tiempo, que se reconoce a sí misma como perteneciente a una determinada clase social, etnia y género, presupone una educación que resulta el cambio de comportamientos y actitudes, o sea, en la internalización de nuevos valores que generan nuevas prácticas.

La formación debe articular la experiencia personal y colectiva de la clase trabajadora, siendo el aprendizaje continuo en la dimensión cotidiana y articulada con sus realidades. Por lo tanto, la organicidad de cada módulo se produce a través de núcleos formados por los (as) participantes en cada etapa, siendo ellos (as) agentes de la dinámica del



curso, estimulando así el vínculo entre la universidad y los movimientos sociales. La autoorganización de la juventud en el movimiento también representa un proceso formativo de la persona y del movimiento social que califica las luchas.

Entendemos la formación como una tarea inconclusa y continua. Construir y producir conocimiento es una tarea revolucionaria que necesita más amor y dedicación a los estudios.

Creemos que este estudio colabora con la producción académica del área educativa, en el diálogo con los movimientos sociales, en la construcción de prácticas educativas que puedan resignificar e impulsar la educación a través del conocimiento popular y el intercambio de experiencias, demostrando que es posible romper con los ataques del gobierno actual que ha ido profundizando violentamente las desigualdades sociales.

Referencias

Cartilha da Assembleia Popular. (2011). *Projeto Popular para o Brasil. Na construção do Brasil que queremos*. São Paulo: Assembleia Popular.

Gil, A. C. (2008). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. São Paulo: Atlas.

Justino, A. A. (2017). *Teologia da Libertação e Marxismo: religião e lutas emancipatórias*. Orientadora Ana Maria Baima Cartaxo. Dissertação (mestrado) Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Florianópolis.

Levante Popular Da Juventude (2012). *Zine Caráter e Organicidade*. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/160451916/Zine-Levante#scribd>.

Minayo, M.C. de S (2000). *Desafio do Conhecimento*. Sétima Edição. Hucitec-Abrasco. São Paulo-Rio de Janeiro.

Neto, A. J. M. (2007). *A Igreja Católica e os Movimentos Sociais do Campo: a Teologia da Libertação e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*. Caderno CRH, Salvador, v. 20, n. 50, p. 331-341.

Paludo, C. (2015). *Educação Popular como resistência e emancipação humana*. Cadernos CEDES, v. 35, p. 219-238.

Paludo, C.; Santos, M. G. C.; Taddei, P. E. D. (2016). *A Educação Popular no Levante Popular da Juventude do Rio Grande do Sul: renovações e permanências*. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/viewFile/27525/25303>.

Rodrigues, A. P. S. L. (2006). *Educação Popular e a Formação dos Educadores Populares no Projeto Beira da Linha: um celeiro de experiências*. João Pessoa. Disponível em:



<http://www.ce.ufpb.br/ppge/Dissertacoes/dissert06/Ana%20Paula%20Soares/Ana%20Paula%20Soares.pdf>.

Saviani, D. (2007). *História das Ideias Pedagógicas no Brasil*. São Paulo: Autores Associados.

Silva, M. L. (2012). *A importância do Curso “Realidade Brasileira e Nordestina” para a construção do Projeto popular*. Relatório resultante de projetos de extensão registrados no SIGProj e apoiados por Editais na PROEXT no período de 2011-2012 – UFPE/CE.

Streck, D. R.; Esteban, M. (2013). *Educação Popular: lugar de construção social coletiva*. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes.



“¡Esta escuela me salvó la vida!”. Jóvenes y experiencias educativas en una escuela gestada por una organización política

Marilín López Fittipaldi

Resumen

En esta ponencia desarrollamos algunos avances de una investigación doctoral, cuyo interés se centra en experiencias educativas puestas en marcha por movimientos sociales y organizaciones políticas. Específicamente, nos propusimos abordar las relaciones, sentidos y prácticas que se despliegan en la cotidianeidad de una escuela para jóvenes y adultos impulsada por una organización política, en un contexto barrial de pobreza urbana y desigualdad de la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina).

Particularmente, en este trabajo el objetivo es analizar la experiencia de los jóvenes estudiantes, describiendo sentidos y prácticas que se despliegan cotidianamente en la escuela. Sostenemos que en el discurrir de la experiencia escolar los jóvenes realizan apropiaciones y resignificaciones que les permiten tensionar experiencias escolares previas, reformular sentidos acerca de la escolaridad y construir modos particulares de involucramiento con la organización política que impulsa la escuela.

La indagación se inscribe en un enfoque socio-antropológico que pretende, desde un abordaje relacional (Achilli, 2005), acceder a “lo no documentado” de la realidad social (Rockwell, 2009). La información empírica que sustenta el análisis fue recabada a partir de un trabajo de campo etnográfico que incluyó observaciones de clases y actividades escolares, así como entrevistas con docentes y estudiantes.

Palabras clave

Experiencias educativas; Organización política; Educación de jóvenes y adultos; Jóvenes; Cotidianeidad social.

Introducción

En esta ponencia desarrollamos avances de una investigación en curso, cuyo interés se centra en conocer los procesos de configuración de experiencias educativas puestas en marcha por movimientos sociales y organizaciones políticas. Específicamente, nos propusimos abordar las relaciones, sentidos y prácticas que se despliegan en la cotidianeidad de una escuela para jóvenes y adultos impulsada por una organización política, en un contexto barrial de pobreza urbana y desigualdad de la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina)¹. La creación de dicha escuela puede inscribirse en un contexto



de emergencia de experiencias educativas que, a partir de la primera década del presente siglo, fueron tomando forma en distintos lugares de la Argentina, conocidas en general bajo el nombre de “Bachilleratos Populares”. Se trata de escuelas secundarias para jóvenes y adultos, impulsadas por movimientos sociales, empresas recuperadas, o colectivos políticos de distinto tipo, que luego de su creación demandaron al Estado su “oficialización” o “reconocimiento”. Esto es, la posibilidad de otorgar títulos oficiales de acreditación del nivel para sus estudiantes, así como certificados que constaten su asistencia regular a un establecimiento escolar. En algunos casos, también, financiamiento para el proyecto educativo y cargos para los docentes².

El creciente interés sobre estas experiencias educativas dio lugar a un vasto campo de investigaciones, con distintas focalizaciones. Así, algunos autores han apuntado a caracterizar los fundamentos y principios orientadores de estos proyectos político-educativos (Elisalde, 2008; Ampudia, 2013; Aguiló & Wahren, 2014), y el modo en que la búsqueda de “reconocimiento oficial” abrió un campo de disputa y negociación con el Estado (Caisso, 2014; García, 2011). En los últimos años, una serie de trabajos han indagado los procesos de construcción de subjetividades políticas en seno de estas experiencias educativas. Buscando eludir una mirada homogeneizante sobre las y los distintos sujetos que integran los Bachilleratos Populares, han avanzado en reconocer las tensiones que existen, frecuentemente, entre los propósitos que orientan los proyectos educativos y los sentidos que construyen las y los estudiantes en el devenir de su experiencia escolar (García, 2018; Kriger & Said, 2015; Said, 2018; Gluz, 2013; Palumbo, 2017).

Retomando algunos de estos interrogantes, en este trabajo buscamos abordar la experiencia de las y los jóvenes estudiantes. Nos detendremos, particularmente, en aquellas construcciones de sentido acerca de la escolaridad en general y de esta escuela en particular, así como aquellas que apuntan a la vivencia de ser parte de un sujeto colectivo.

Desde la perspectiva que asumimos, el concepto de *experiencia* (Thompson 1981), apunta a enfocar el modo en que los sujetos viven las particulares condiciones objetivas en que se encuentran, en un contexto histórico y culturalmente situado. Consideramos, a su vez, que en el discurrir de estas experiencias los sujetos realizan diversas *apropiaciones*. Es decir, a partir de considerar “la naturaleza activa/transformadora de la acción humana, y el carácter constrictivo/permisivo de la cultura” (Rockwell,



2018:141), se enfoca el proceso activo por el cual los sujetos logran tensionar y resignificar sentidos y prácticas disponibles socialmente.

La indagación se inscribe en un enfoque socio-antropológico que pretende, desde un abordaje relacional, acceder a “lo no documentado” de la realidad social (Rockwell, 2009). Desde esta perspectiva se privilegia el conocimiento de la cotidianidad social, pero en permanente articulación con procesos socio- históricos que corresponden a distintas escalas (Achilli, 2005).

De acuerdo a esta perspectiva teórico-metodológica, se adoptó una estrategia intensiva para la construcción de la información. Se realizó un trabajo de campo etnográfico, prolongado y en profundidad. El mismo incluyó observaciones de clases y distintas actividades escolares, así como otras actividades impulsadas por la organización política en diferentes contextos – marchas y acciones de protesta, encuentros con otras organizaciones vinculadas al campo educativo, entre otras-. Se realizaron entrevistas en profundidad y conversaciones informales durante la jornada escolar con docentes y estudiantes que se encuentran cursando los distintos años, y también con estudiantes graduados/as. Por último, se revisaron fuentes documentales de distinto tipo: leyes y normativas nacionales y provinciales, noticias periodísticas y documentos elaborados por la organización³.

El proyecto político-educativo de “Gestión Social”: una breve caracterización

La escuela en la que desarrollamos la investigación fue creada en el año 2011 por una organización política de la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina). Se encuentra en un barrio en el extremo noroeste del municipio, delimitado hacia el este por una ruta provincial y surcado, de norte a sur, por un canal que lo divide en dos. Si bien son dos áreas diferenciadas –usualmente consideradas como “zona urbana” y “zona rural”- ambas están atravesadas por condiciones de pobreza, déficit en la provisión de servicios públicos, y enfrentadas a dos problemas centrales: las inundaciones, por el frecuente desborde del canal, y los desalojos, a causa de las complejas condiciones de tenencia de la tierra y la existencia de proyectos urbanizadores de capital privado.

En este contexto, y aún cuando la organización ya venía desarrollando otras experiencias socioeducativas con niños/as y jóvenes en el barrio, el proyecto de creación de la escuela se formuló, antes que nada, como estrategia política para intervenir en un espacio de alta conflictividad, según los referentes de la organización, como una “barrera” para reducir la presión de los desalojos. Así, la escuela se entramó, desde los inicios, con la lucha política que entabla la organización que la impulsó. Fue,



a su vez, el puntapié para un largo proceso en el que la organización profundizaría distintas propuestas educativas: en el nivel inicial un jardín de infantes, que funciona en el mismo lugar que la escuela secundaria, y en el nivel terciario una tecnicatura en gestión social, ubicada en el área céntrica de la ciudad⁴.

Con el transcurso de los años se fueron delineando las características que posee hoy el proyecto político-educativo, y que sus impulsores sintetizan bajo la categoría “Gestión Social”⁵. Retoman, así, la figura contenida en la normativa vigente a nivel nacional, pero dándole un sentido propio, trascendiendo la estricta letra de la ley⁶. Cabe señalar, no obstante, que la misma aún no está contemplada en la normativa vigente para la provincia de Santa Fe, jurisdicción que se encuentra actualmente debatiendo un nuevo Proyecto de Ley de Educación provincial (Debonis, López Fittipaldi, Saccone, 2019).

La progresiva construcción del proyecto educativo se desarrolló en diálogo con otras experiencias semejantes –especialmente los Bachilleratos Populares-, y al calor de las negociaciones que, en pos de obtener el reconocimiento oficial de la escuela, la organización debió entablar con el Ministerio de Educación provincial. La oficialización fue alcanzada, finalmente, en el año 2018, aunque los alcances de la misma continúan siendo objeto de lucha y debate⁷.

Entre los objetivos explícitos que orientan al proyecto, se destaca la voluntad de incorporar a aquellos sectores “expulsados de la escuela oficial”, a la vez que promover la “innovación educativa” desde una “perspectiva crítica”. También, se resalta la intención de fortalecer la organización a nivel barrial y, consecuentemente, la posibilidad de que las y los estudiantes se incorporen activamente a la organización que fundó la escuela.

La escuela funciona en el turno vespertino, con una organización graduada en cinco ciclos, a lo largo de tres años, que retoma la estructura de las Escuelas de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) de la provincia de Santa Fe. Las asignaturas se encuentran organizadas por áreas –Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua y Comunicación y Ciencias Exactas-, a las que se añade un día semanal de “Integración”: un tiempo dedicado a la articulación de contenidos curriculares así como a actividades orientadas al fortalecimiento del grupo.

Aun cuando el diseño curricular se basa en lineamientos promovidos desde el Ministerio de Educación provincial, los docentes señalan que la perspectiva propia del proyecto educativo se imprime dándole a los mismos “una vuelta política”, con miras al objetivo



que los orienta de “formar sujetos críticos”. Al mismo tiempo, esta reelaboración está orientada por un criterio de “innovación pedagógica”, que se plasma, por ejemplo, en estrategias como la re-organización de los contenidos curriculares en “Seminarios”. Éstos se organizan temáticamente a partir del cruce de distintas disciplinas y la incorporación de “docentes invitados” - profesionales, artistas, escritores, activistas políticos, entre otros-. En este sentido, continúa vigente una lucha por que se reconozca el carácter “experimental” de la escuela, a los fines de tener mayor libertad en la formulación curricular.

La tarea docente es llevada a cabo por personas con distinta formación: profesionales, personas idóneas, estudiantes universitarios/as, y docentes de nivel secundario en actividad o retirados. La formación docente no es un requisito excluyente, sino más bien, el compartir cierta “afinidad política” con respecto al proyecto. Se organizan -al igual que en los Bachilleratos Populares- en “parejas pedagógicas” que suponen la planificación y el dictado de las clases en duplas, o en ocasiones en tríos. A su vez, las y los docentes conforman pequeños equipos que asumen distintas tareas vinculadas a la administración escolar y, junto con la asamblea que se realiza de forma regular, a la toma de definiciones.

En la actualidad asisten más de cien estudiantes distribuidos de 1ero a 5to año, que viven, su mayoría, en la zona aledaña a la escuela. Siguiendo la normativa vigente a nivel provincial para la educación de jóvenes y adultos, la escuela admite estudiantes desde los 17 años, y sin límite de edad. Como hemos destacado en otro lado (López Fittipaldi, 2018), en los últimos años se ha producido un aumento significativo de la cantidad de jóvenes en relación a los adultos, en consonancia con la tendencia que se muestra a nivel provincial y nacional para la modalidad (Coronel & Cosolito, 2016; Sinisi, Montesinos, & Schoo, 2010). Ante este escenario, se abre un campo fértil para indagar, así como han hecho otras investigaciones (Lander, 2010; García, 2018), el particular modo en que las y los jóvenes viven y significan esta experiencia escolar.

La experiencia escolar de los jóvenes: “Una escuela diferente”

En tensión con lo anteriormente descrito, acerca de los objetivos y características del proyecto político-educativo, es posible establecer algunas relaciones con las expectativas que construyen las y los jóvenes estudiantes, y cómo estas se ven interpeladas al incorporarse a una escuela que se concibe como “diferente” a las demás. En el curso de este proceso, las y los estudiantes van formulando sentidos que apuntan a la valoración positiva de distintos aspectos de la experiencia escolar, aun cuando,



cabe destacar, los mismos no se presentan con igual fuerza en todos/as ellos/as. En esta oportunidad nos detendremos en dos núcleos: *la relación con conocimientos y el trabajo áulico*, por un lado, y *los vínculos personales* que se tejen en la escuela, por otro.

Es importante señalar, para comenzar, que las y los estudiantes llegan a esta escuela luego de otras experiencias de escolarización en el nivel secundario, frecuentemente recientes, interrumpidas por distintos motivos⁸. A partir de los argumentos que expresan –ya se trate de motivos vinculados a sus vidas personales y familiares, a su desempeño escolar o a conflictos recurrentes con sus compañeros y/o docentes- es posible señalar que, en general, las razones esgrimidas remiten, como han señalado otras investigaciones, a experiencias significadas como individualizadas (Martínez, 2016). Es decir, percibidas como tales por los sujetos, antes que vinculadas a las condiciones en las que desenvuelven su escolaridad.

Las y los estudiantes fundamentan la elección de esta escuela para culminar sus estudios por su cercanía al hogar, los horarios de cursado en el turno vespertino, la recomendación de alguna persona cercana, o incluso, por ser la única que aceptó inscribirlos. De este modo, tal elección –que da cuenta de las estrategias que los sujetos despliegan para continuar su escolaridad-, no responde, en principio, a una opción en base a las características que orientan al proyecto pedagógico, o a los lineamientos políticos que lo sustentan, o bien fundada en la articulación de la escuela al colectivo político.

Así, en general, las y los estudiantes van conociendo la propuesta escolar una vez que ya están cursando, cuyas características deben ir desentrañando, no sin tensiones, en el día a día de la escuela. En esta línea, refieren a las “acomodaciones” y “adaptaciones” que deben ir realizando a lo que describen como una “experiencia totalmente distinta”: “Me costó adaptarme a este nuevo modelo educativo que se estaba presentando y poniéndose a prueba. Me alteraba, me ponía nervioso cada la vez que los profesores me querían hacer participar” (Ariel, egresado. Reg. N°45, entrevista, 10/12/18).

Es importante señalar, no obstante, que aun cuando los estudiantes refieren a las características de la escuela como dadas, como señala Rockwell (2018), es a través de las acciones y relaciones que tanto docentes como estudiantes despliegan que la misma se concretiza, existe. Así, las experiencias cotidianas en la escuela serán producto de una compleja articulación de procesos de control, apropiación y producción de prácticas y sentidos por parte de las y los distintos sujetos sociales que la integran.



Como anticipamos, entre las dimensiones que suelen destacarse al describir aquello que hace de ésta una “escuela diferente”, las y los estudiantes señalan la posibilidad de establecer una *relación distinta con los conocimientos*: “Lo que es diferente acá es que te dan más conocimientos, y más ganas de investigar eso que te están ocultando, por así decirlo. No sé si ocultando, pero si limitan [en otras escuelas]” (Andrea, egresada. Reg. N°51, entrevista. 29/08/2019).

En particular, mencionan las características que asume el *trabajo áulico*, ya que se promueve fuertemente la participación y la resolución colectiva de las consignas. Si bien esto es valorizado, en general, por las y los estudiantes, señalando que “practicamos entre todos”, “aprendemos de otra manera, y es más fácil” (Laura, estudiante. Reg. N°20, entrevista, 11/06/2018), en ocasiones puede generar, también, oposición por parte de los mismos. Así es posible observar, en el transcurso de las clases, distintas situaciones en las que las y los estudiantes se niegan a participar de propuestas de trabajo, por ejemplo, cuando la misma reviste características lúdicas, o requiere la participación a través de la lectura en voz alta frente a sus compañeros.

Otra de las dimensiones que las y los estudiantes mencionan de modo recurrente refiere a *los vínculos personales* que construyen en la escuela: “me hallo bien con mis compañeros, por eso también me gusta la escuela” (Laura, estudiante. Reg. N°20, 11/06/2018). Se trata de vínculos que construyen con sus pares, pero también, de modo significativo, con las y los docentes, a quienes suelen considerar como “compañeros”: “no son solamente profes, son compañeros también. Porque yo no veo eso en otras escuelas” (Andrea, egresada. Reg. N°26, entrevista. 03/09/2018). Destacan, de este modo, un lazo que se construye en base a la “confianza”:

Que un profesor, que uno lo vio siempre así, el profesor allá y el alumno acá, que te cuenten de sus vidas, de sus viajes, de sus sueños también... de su vida cotidiana, de su trabajo, de cómo le fue en el día.... Para mi esas cosas eran re importantes porque te mostraban la confianza (Carolina, egresada. Reg. N°26, entrevista. 03/09/2018).

Como se expresa en los fragmentos de entrevistas anteriormente citados, estos sentidos se van formulando, a su vez, en contraposición –y, frecuentemente, como crítica- a esas “otras escuelas” por las que estos/as jóvenes han transitado en el pasado. De este modo, las reflexiones que van elaborando los estudiantes se muestran fecundas para tensionar esas experiencias escolares previas, atravesadas por las dificultades y desilusiones que se encadenaron a la interrupción de la misma, y construir otros sentidos acerca la propia escolarización:



¡[Me anoté en la escuela] para terminar y que me dejen de hinchar en mi familia! Después decís, ¡no!, ¡si me gusta!, ¡me encanta esto de venir y compartir un mate con los compañeros, las charlas con los profes, el conocimiento que te dan ellos! (Andrea, egresada, Reg. N°26, entrevista. 03/09/2018).

A partir de estas resignificaciones, además, es plausible que los jóvenes logren no solo valorar positivamente la experiencia cotidiana en la escuela, sino también, como plantean Sinisi et al. (2010), proyectar sentidos ligados a la “realización personal” que sobrepasan el ámbito escolar para impregnar la propia vida de los jóvenes:

¡Yo siempre digo que esta escuela me salvó la vida! ¡Me cambió absolutamente todo! Y si no hubiera llegado acá, ¡no sé qué sería de mí ahora! Gracias a ellos, me dieron la fuerza para que me anime a ser lo que quiero ser. (Carolina, egresada. Reg. N°26, entrevista. 03/09/2018).

“A la escuela la llevo a dónde voy”: Los sentidos de “ser parte” de la escuela

Nos interesa detenernos, por último, en aquellas construcciones de sentido que se vinculan a la vivencia de *ser parte* de la escuela. Se trata de sentidos que se manifiestan de modo desigual entre las y los distintos sujetos, pero que cobran relevancia en relación a la intención explícita, por parte las y los impulsores del proyecto, de promover procesos de organización colectiva a partir de la experiencia escolar.

En base a los avances realizados hasta el momento, consideramos que estos sentidos sedimentan, principalmente, a partir de dos dimensiones de la experiencia escolar cotidiana. En primer lugar, destacamos los fuertes vínculos que, como ya fue mencionado, se tejen con otros sujetos que integran la escuela, especialmente las y los docentes:

Acá no, ellos te involucran en su vida, y ellos se involucran en la tuya. Y eso es lo más lindo, porque no sos un alumno más, que no te dan importancia. Te hacen sentir parte... ¡de todo! de su vida, de la clase (Andrea, egresada, Reg. N°26, entrevista. 03/09/2018).

En segundo lugar, este ser parte tiene que ver, también, con el hacerse cotidiano de la escuela. Esto es, diferentes tareas para la puesta en marcha del espacio escolar - disponer bancos y mesas, limpieza y refacciones menores, por ejemplo- que, junto a las y los docentes, realizan los estudiantes antes y después de cada jornada. Tales prácticas -que, cabe señalar, son incentivadas por las y los docentes, y resistidas, en ocasiones, por algunos/as estudiantes- aparecen vinculadas a “sentir el espacio propio”, a considerar que “todos los espacios son de todos”. Así lo describía una joven egresada: “Nosotras venimos acá, y es como... bueno: entramos acá, entramos allá, abrimos, nos



tomamos mates, ponemos la pava, cebamos mate. Y eso no lo hacés en cualquier lado. Es como otra casa". (Analía, egresada. Reg. N°51, entrevista. 29/08/2019).

Llegado este punto cabe preguntarse ¿Pueden estas vivencias vinculadas al “ser parte” de la escuela coagular en procesos de organización colectiva que se extiendan en el tiempo? ¿Qué otras articulaciones se hacen posibles en base a estas experiencias? Las respuestas a estos interrogantes, dado el avance de nuestra investigación, no pueden ser más que tentativas y provisionales. Sin embargo, es posible arriesgar algunas anticipaciones.

Una primera cuestión a tener en cuenta es que, así como ocurre en cualquier escuela, aquí también llega el momento de culminar el tránsito por la misma. La graduación, organizada por las y los estudiantes, supone todo un aprendizaje en sí misma, y es un momento en que se condensan una multiplicidad de tensiones, expectativas, temores, que no pocas veces estallan en conflictos.

Si bien no podemos abordar aquí las distintas dimensiones que se abren en dicha instancia, si nos interesa señalar, en relación al argumento que venimos desarrollando, como el egreso de la escuela puede implicar una especie de quiebre, una interrupción de ese “ser parte”, que en algunos casos adquiere la intensidad de un “duelo”:

Cuando yo terminé, la sensación fue: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? O sea... era como... bueno, ahora ya no voy más... se siente después el vacío. De no pertenecer, de venir como visitante. De venir a visitar un espacio que era tuyo. ¿Entendés? Era tuyo, era parte de tu vida (Reg. N°51, entrevista. Analía, egresada, 29/08/2019)

Existen, en cambio, otras posibilidades por las cuales las y los estudiantes egresados pueden continuar manteniendo contacto con la escuela, aunque ya no representen la constancia y regularidad anterior. Una de ellas es a través de familiares que se incorporan como estudiantes, ya sea en el nivel secundario o el jardín de infantes. Especialmente para las mujeres, el jardín de infantes puede ser también un lugar de encuentro, a través de los “grupos de madres” que se reúnen una vez a la semana para desarrollar distintas actividades – elaboración de materiales para los niños, actividades para la recaudación de fondos, entre otras-.

La incorporación de egresadas y egresados como parte del cuerpo docente, aunque suelen ser invitados, no es frecuente. Las y los estudiantes entrevistados manifestaron “incomodidad”, “vergüenza”, y “falta de confianza” en sí mismos con respecto a esa posibilidad, especialmente en lo que atañe al nivel secundario. En este sentido, el nivel



del jardín de infantes, es nuevamente, unos de los caminos que resultan “más posibles” desde la perspectiva de las y los estudiantes⁹.

Por otro lado, las y los jóvenes destacan los importantes requerimientos de tiempo y esfuerzo que supone el sostenimiento de la participación en la escuela, debido a las características que adquiere el proyecto: “siempre la gestión social y todo lo que lleve horizontalidad, y todo eso, lleva más tiempo (...). Lleva mucho más sacrificio... Está todo bien, está todo lindo con la autogestión, pero... requiere un montón de gente dispuesta” (Reg. N°51, entrevista. Analía, egresada, 29/08/2019).

Desde estos planteos parecen tangibles las limitaciones que enfrentan los intentos, por parte de las y los impulsores del proyecto educativo, de prolongar la continuidad del vínculo de las y los estudiantes con la escuela, más allá su egreso. Ahora bien, la incorporación activa a la escuela, o a la organización política que la impulsa, es solo uno de los derroteros posibles para estos/as jóvenes. Aunque es un camino que aun nos resta explorar en profundidad, ciertos indicios nos llevan a considerar otros modos que puede asumir el involucramiento político, menos evidentes –o menos “conscientemente radicales” en términos de Gledhill (2000), pero no por ello menos significativos desde las experiencias de las y los sujetos.

En tal sentido, el relato de Carolina, una joven egresada, resulta sugerente. Reflexionado sobre su propio recorrido al finalizar la escuela, y algo desilusionada, detalla las dificultades y contratiempos que fue encontrando ante sus repetidos intentos de integrarse a otras actividades promovidas por la organización. Sin embargo, esgrime: “ahora que no estoy militando, la escuela siempre la milito yo, desde mi parte”. Al repreguntar en la entrevista, y retomando su expresión, qué sería en su perspectiva “militar la escuela”, define: “soy mucho más de la palabra, y del contar, del convidar, de llevar gente a los lugares, que más gente conozca, que se hable más. Hacer conocidas las cosas”. Finalmente, mientras muestra en su brazo un tatuaje del logo de la escuela, remata: Yo la escuela la llevo toda entera a dónde voy. Es como... ¡es mi vida! no es parte de mi vida, *es mi vida* [enfatisa] ¡y la llevo a dónde sea!” (Carolina, egresada. Reg. N°26, entrevista. 03/09/2018).

A partir de esos pasajes, consideramos, es posible reflexionar acerca de las apropiaciones que realizan las y los sujetos como parte de los aprendizajes cotidianos que se despliegan en la escuela. Retomando a Rockwell, sostenemos que el contenido escolar “inevitablemente integrado a la propia experiencia, lleva en sí mismo la posibilidad de su reelaboración fuera ya del control escolar; posibilidad seguramente



ligada al ritmo del movimiento social, a la formación histórica de clase” (2018:58). Si consideramos que, en este caso, tal contenido refiere a experiencias en torno al involucramiento político –“ser parte” en términos de las y los sujetos-, es posible considerar las huellas de tal experiencia que trasvasan el tiempo y espacio de la escuela, incorporadas ya a la vida de estos/as jóvenes, y abiertas a otras posibles reformulaciones.

Reflexiones Finales

En este trabajo nos propusimos analizar las experiencias cotidianas de las y los jóvenes estudiantes en una escuela creada por un movimiento social, tensionándolas, a su vez, con los propósitos y objetivos que esgrimen las y los impulsores del proyecto educativo.

En primer lugar sostuvimos que, en el cruce de estas experiencias, las y los estudiantes elaboran, en general, aunque no de modo unánime, valoraciones positivas acerca de la escuela, articuladas en torno a una concepción de “una escuela diferente”. Se trata de una progresiva construcción que, partiendo de un desconocimiento inicial acerca de las características del proyecto, supone diversas apropiaciones. En ese proceso, que no excluye tensiones y resistencias, la reflexividad puesta en juego permite cuestionar experiencias escolares previas, así como reformular sentidos acerca de la propia escolarización. Elaboraciones en las que, traslapados, emergen posicionamientos críticos en torno a esas “otras escuelas” por las que han transitado.

En segundo lugar, argumentamos que a partir de esas experiencias cotidianas

-en la que sedimenta, para ciertos/as estudiantes, la vivencia de “ser parte” de un sujeto colectivo- se configuran modos particulares de involucramiento político, aunque éstos no necesariamente coincidan con las expectativas de las y los impulsores del proyecto, en términos de incorporación activa a la organización.

De este modo, a lo largo del trabajo fue posible mostrar algunas de las particularidades que asumen, para las y los jóvenes, valoraciones, sentidos y prácticas en torno a lo educativo y lo político, que se tejen como parte de una misma trama en la experiencia escolar. Asimismo, intentamos enfatizar la heterogeneidad que subyace a estas propuestas educativas, al describir disimiles apropiaciones de las y los sujetos. Se trata de avances que, desde nuestra perspectiva, abren caminos para indagar la diversidad de sentidos que puede cobrar la dimensión educativa en el contexto de movimientos sociales.



Notas

¹ Proyecto de Investigación doctoral: “Movimientos sociales, jóvenes y educación. Un análisis antropológico de los “Bachilleratos Populares” como experiencias socioeducativas emergentes en contextos de desigualdad social”. Dirección: Dra. Laura Santillán; Co-dirección: Dra. Elena Achilli. El proyecto cuenta con el financiamiento de una Beca Doctoral CONICET.

² De acuerdo a un relevamiento realizado a nivel nacional, para el año 2015 existían en la Argentina un total de 93 Bachilleratos Populares: el 38% localizado en la Ciudad de Buenos Aires, el 54% en la Provincia de Buenos Aires y el 8% en el resto de las provincias del país. Del universo de 86 experiencias incluidas en el relevamiento, el 46% están oficializadas y pueden

emitir títulos de estudios secundarios. De éstas, 23 se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, 15 en la provincia de Buenos Aires y sólo 2 en el interior del país (Grupo de Estudios sobre Movimientos Sociales y Educación Popular - GEMSEP, 2016. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/0B9WAEryqfZ5MUd4OHRQM2NPMFk/view>).

³ Todos los nombres propios incluidos en este trabajo son ficticios a fines de resguardar el anonimato de las y los sujetos. Las frases y palabras encomilladas refieren a expresiones literales, o a categorías nativas, registradas en el trabajo de campo.

⁴ Por razones de espacio no podemos detenernos extensamente en la descripción de estos otros espacios educativos. Solo a fines de comprender la articulación con el nivel secundario, es importante recalcar que al nivel inicial

asisten niñas y niños que habitan en el barrio, frecuentemente familiares o vecinos de las y los estudiantes del nivel secundario. Aun cuando son dos proyectos que a nivel organizativo mantienen cierta independencia entre sí, confluyen en espacios de deliberación conjunta, comparten el espacio físico y realizan algunas actividades en conjunto. El nivel terciario, en contraste, tanto por su ubicación geográfica como por su propuesta educativa está orientado a otros conjuntos sociales, frecuentemente estudiantes y/o militantes políticos de sectores medios. Son ciertamente escasos las y los egresados del secundario que asisten o asistieron.

⁵ Como ha sido desarrollado en otro trabajo (López Fittipaldi, 2019), en tanto categoría social, la “gestión social” condensa una multiplicidad de sentidos que se ponen en juego en la construcción cotidiana de la escuela, y que orientan el quehacer de los distintos sujetos que la integran.



⁶ Si bien existen diferencias jurisdiccionales, a nivel nacional es la figura de “gestión social” -incorporada en la Ley de Educación Nacional (N°26206) del año 2006- la que permitió encuadrar legalmente a las iniciativas impulsadas por organizaciones sociales y políticas, admitiendo la posibilidad de que sean reconocidas oficialmente.

⁷ Al momento de escribir estas líneas continúan las negociaciones con el Ministerio de Educación provincial para dejar efectiva la oficialización. Si bien la escuela actualmente puede emitir títulos para los estudiantes egresados, no ha recibido el financiamiento acordado, ni se han designado formalmente los cargos directivos.

⁸ Este aspecto fue desarrollado de modo más exhaustivo en un trabajo anterior (López Fittipaldi, 2018).

⁹ Así lo relataba una estudiante egresada: “la verdad soy re vergonzosa. Y no sé si estaría para soportar... para dar clases. Capaz que es la confianza de uno mismo (...). Ponele, vos con los chicos [del jardín] es diferente, porque estás tratando con pequeños. Es más remontable. Pero imaginate tratar con pibes prácticamente de mi edad, o más grandes. ¡Tratar de darles una clase!” (Reg. N°51, entrevista. Andrea, egresada, 29/08/2019).

Referencias Bibliográficas

- Achilli, E. (2005). *Investigar en Antropología Social. Los desafíos de transmitir un oficio*. Rosario, Argentina: Laborde.
- Aguiló, V., & Wahren, J. (2014). Los bachilleratos populares de Argentina como “campos de experimentación social”. *Argumentos (México, D.F.)*, 27, 97–114. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952014000100005&lang=pt
- Ampudia, M. (2013). Educación y Autogestión. Estética Política y Autogestión. Estética política de los Bachilleratos Populares. En Elisalde, Falero, N. Dal Ri, & Ampudia (Eds.), *Movimientos sociales, educación popular y trabajo autogestionado en el cono sur*. Buenos Aires: Buenos Libros.
- Caisso, L. (2014). *Una escuela como ésta. Experiencias educativas en un movimiento social de la ciudad de Córdoba (Argentina)*. Universidad Nacional de Córdoba.
- Coronel, A. G., & Cosolito, P. (2016). *EPJASF 2014: Situación de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la Provincia de Santa Fe*.
- Debonis, F., López Fittipaldi, M., & Saccone, M. (2019). Educación especial, de gestión social y técnico-profesional en el Proyecto de Ley de Educación provincial (Santa Fe,



Argentina). En *Tensiones entre lo público, lo privado y lo estatal en tramas educativas situadas: IV Seminario taller Red de Antropología y Educación, 2018* (pp. 223–231). Centro de Estudios Avanzados. Centro de Estudios Avanzados. Recuperado de <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/11757>

Elisalde, R. (2008). Movimientos sociales y educación: Bachilleratos Populares en empresas recuperadas y organizaciones sociales. Experiencias pedagógicas en el campo de la educación de jóvenes y adultos. En R. Elisalde & M. Ampudia (Eds.), *Movimientos sociales y educación. Teoría e historia de la Educación Popular en Argentina y América Latina*. Buenos Aires: Buenos Libros.

García, J. (2011). Bachilleratos populares y “autonomía”: ¿espacios de la transformación o de la reproducción? *Boletín de Antropología y Educación*, 1–9.

García, J. A. (2018). *La producción cultural del sujeto crítico: construcciones de conocimientos en “Bachilleratos Populares”*. Universidad de Buenos Aires.

Gledhill, J. (2000). *El poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política*. Bellaterra.

Gluz, N. (2013). Alternativas escolares en movimientos sociales y procesos de subjetivación política. *X Jornadas de Sociología*.

Kruger, M., & Said, S. (2015). Subjetivación política juvenil en Bachilleratos Populares: representaciones de estudiantes jóvenes sobre la política y el Estado. *XI Jornadas de Sociología*, 1–19. Recuperado de <http://www.aacademica.org/000-061/885>

Lander, E. (2010). *Prácticas discursivas y dificultades en el hacer de estudiantes y docentes en un bachillerato popular. Tensiones y alcances en la producción de resistencia desde un dispositivo pedagógico*.

Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales –Sede Academica Argentina-. Recuperado de <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3630/2/TFLACSO-2011EDL.pdf>

López Fittipaldi, M. (2018). Social movements and education. Intergenerational relations in an educational experience in Rosario city (Argentina). En *18th IUAES World Congress* (pp. 4347–4364).

López Fittipaldi, M. (2019). Escuela de “Gestión Social” y práctica docente. Una mirada socioantropológica. En *III Jornadas Regionales de Investigación Educativa*. San Salvador de Jujuy.

Martínez, D. (2016). Las trayectorias furtivas. Tránsitos posibles de la escolarización. *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 38(2), 35–51. Recuperado de <http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2016-2/exploraciones1.pdf>



Palumbo, M. M. (2017). Entre identificación y subjetivación. Notas sobre la construcción de subjetividades políticas en movimientos populares.

Estudios filosofía práctica e historia de las ideas, 19(0), 1–11. Recuperado de <http://qellqasqa.com.ar/ojs/index.php/estudios/article/view/188/234>

Rockwell, E. (2018). *Vivir entre escuelas. Relatos y presencias*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Said, S. (2018). Young people in Popular High Schools: Between individuation and political subjectivation. *Universitas. Revista de ciencias sociales y humanas*, (28), 141–157. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.17163/uni.n28.2018.07> Young

Sinisi, L., Montesinos, M. P., & Schoo, S. (2010). *Trayectorias socio-educativas de jóvenes y adultos y sus experiencias con la escuela media*. Área de Investigación y Evaluación de Programas. DiNIECE. Ministerio de Educación.

Thompson, E. P. (1981). *Miseria de la Teoría*. Barcelona, España: Editorial Crítica.



A educação no maranhão: indicações sobre a proposta político pedagógica do “Sim, eu posso” e “Círculos de cultura”.

Zaira Sabry Azar
Cristiana Costa Lima

Resumo

O artigo trata da educação como estratégica na construção de uma hegemonia político ideológica, destinada a desenvolver em cada sujeito a ideia de cultura geral, com sujeitos educados para a vida, tendo como referência o pensamento do italiano Antonio Gramsci, com destaque para as categorias educação, ideologia e cultura. Objetiva refletir criticamente sobre a proposta político pedagógica dos métodos de alfabetização “Sim, eu posso” e “Círculos de cultura”, adotados pela Jornada de Alfabetização do estado do Maranhão, coordenada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra. Demarca o nexos entre cultura e hegemonia, que perpassa o processo político vinculado à luta pela hegemonia. O MST, como organização política que considera a educação e formação como dimensão política do sujeito histórico, articula, na experiência citada, o método cubano de alfabetização e os “círculos de cultura” defendidos pela experiência freyriana, para alfabetizar a população em regiões pobres do estado, o que implica grandes desafios pedagógicos e políticos. Metodologicamente, faz uma revisão bibliográfica e pesquisa junto aos sujeitos envolvidos sobre os resultados culturais do processo. Conclui destacando a importância da experiência, observando que as metodologias adotadas apresentam desdobramentos políticos importantes no processo de uma cultura geral, mas que o papel exercido pelo Estado não permite a ampliação e aprofundamento da dinâmica, posto que não lhe interessa a construção de uma nova hegemonia, o que implica desafios impostos pelas contradições próprias da sociedade moderna.

Palavras chave

Educação; Cultura; Hegemonia; Métodos de alfabetização; Maranhão.

Abstract

The article deals with education as strategic in the construction of an ideological political hegemony, designed to develop in each subject the idea of general culture, with subjects educated for life, having as reference the thought of the Italian Antonio Gramsci, with emphasis on the categories education, ideology and culture. It aims to critically reflect on the pedagogical political proposal of the “Sim, eu posso” and “Círculos de cultura”



literacy methods adopted by Jornada de Alfabetização do estado do Maranhão, coordinated by the Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. It outlines the nexus between culture and hegemony, which runs through the political process linked to the struggle for hegemony. The MST, as a political organization that considers education and training as a political dimension of the historical subject, articulates, in the mentioned experience, the Cuban method of literacy and the “Círculos de Cultura” defended by the Freyrian experience, to literate the population in poor regions of the state, which entails major pedagogical and political challenges. Methodologically, it makes a literature review and research with the involved subjects about the cultural results of the process. He concludes by highlighting the importance of experience, noting that the methodologies adopted present important political developments in the process of a general culture, but that the role played by the State does not allow the expansion and deepening of the dynamics, since it does not interest the construction of a new hegemony. This implies challenges posed by the contradictions inherent in modern society.

Keyword

Culture; Hegemony; Literacy methods; Maranhão

Introdução

A educação expressa e media as relações contraditórias entre as classes sociais, cumprindo importante papel na dinâmica social, portanto nas transformações que resultam dos processos históricos, ou seja, nas formações econômica, social, política e cultural. Particularmente, na dimensão da formação da cultura, a educação pode assumir a perspectiva amoldadora ou libertária, no sentido que trabalha para “moldar indivíduos” à ordem social vigente ou forma sujeitos que, a partir de um conhecimento crítico busque proposições para a superação de suas realidades.

O Maranhão, estado do Nordeste brasileiro, segue a configuração geral da região, sendo particularmente caracterizado pela histórica e típica desigualdade do desenvolvimento dependente da economia periférica. De forma singular, politicamente vivenciou oligarquias que lhes marcaram profundamente a cultura, negligenciando os avanços sociais e democráticos que resultaram das lutas sociais. As negligências dos governos oligárquicos fazem o estado compor, de forma reiterada e sistemática, o *ranking* dos piores indicadores do país.



De forma especial, no que se refere à educação, os dados são alarmantes, principalmente, para as populações camponesas, como as quilombolas, indígenas, extrativistas, ribeirinhas e sem terra. A ausência de políticas públicas para estas populações as colocam em patamares próprios da falta de direitos, ferindo o preconiza as legislações brasileiras. Tal situação resulta no empobrecimento geral do estado nas várias dimensões da vida, apesar dos muitos recursos naturais existentes.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) luta pela terra, pela reforma agrária e pela superação da ordem social vigente, lhe sendo clara o papel da educação. Neste sentido, constrói, junto a outras organizações e movimentos do campo, a luta pela Educação do Campo, que combina, como diz Caldart (2012), “luta pela educação com luta pela terra, pelo direito ao trabalho, à cultura, à soberania alimentar, ao território” (p. 261). Como conquista desta luta resultou Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), política pública que garante a educação para as populações camponesas.

O MST, no processo de organização de luta pela terra tem desenvolvido práticas pedagógicas que se articulam com a concepção de educação popular defendida pelo educador brasileiro Paulo Freire, sendo, conforme Paludo (2012), este Movimento, “o que mais tem contribuído na discussão e efetivação de experiências de processos não formais, a chamada formação política, e de uma nova educação e uma nova escola, que resgatam os lineamentos centrais da educação popular” (p. 283), que se apresenta como “teoria e prática educativas alternativas às pedagogias e às práticas tradicionais e liberais, que estavam a serviço da manutenção das estruturas de poder político, de exploração da força de trabalho e de domínio cultural” (p. 281)

No Maranhão, este Movimento coordena a experiência de alfabetização de jovens e adultos implementada pelo atual governo estadual, na perspectiva de superação do analfabetismo no estado. Para tanto, articula as metodologias pedagógicas “Sim, eu posso!” e “Círculos de Cultura”. Considerando esta iniciativa, este artigo contextualiza a experiência, tendo como referencial a concepção gramsciana de educação e seu papel na construção da cultura, ou da superação da relação subalternizada entre as classes.

O texto apresenta-se estruturado em dois itens, além desta introdução e das considerações. Inicialmente, trata da educação elemento central para a construção da cultura, e neste sentido, estratégica para a construção da hegemonia a classe trabalhadora. No segundo item, configura a Jornada de alfabetização no Estado Maranhão e coordenada pelo MST, refletindo criticamente sobre os métodos adotados.



Por fim, conclui por sua importância e necessidade da iniciativa, apesar das complexidades e contradições que mediam o processo.

A educação como projeto de sociedade na construção da hegemonia da classe trabalhadora

A educação não tem um “modelo ideal” que deve ser seguido. Ela deve ser entendida como expressão das contradições e disputas de projetos na sociedade. Sob a lógica do sistema do capital, a educação tem servido para (i) fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à máquina produtiva e (ii) gerar e transmitir um conjunto de valores que legitima os interesses dominantes, como se não houvesse nenhuma alternativa a essa lógica.

Nesse contexto, é importante destacar que as determinações gerais do capital afetam cada âmbito particular com alguma influência na educação, e não apenas a educação formal. Elas estão totalmente integradas na totalidade dos processos sociais (Mészáros, 2008). Sob o domínio do capital, é necessário assegurar que os indivíduos internalizem a dinâmica da reprodução capitalista por meio da organização de uma cultura adequada do processo ideológico formador do modo de vida do capital, tendo em vista a consolidação de sua hegemonia.

O conceito de hegemonia de Gramsci nos ajuda a entender como a classe dominante integra à sua concepção de mundo as “massas”, garantindo uma aceitação pelas classes subalternas do modo de pensar que conformam uma determinada visão de mundo.

Os aparelhos privados de hegemonia, tal como nos aponta Gramsci (2000), constituem-se como instâncias garantidoras da manutenção de uma hegemonia, na medida em que lhes cabem criar as condições necessárias de materialização de conteúdos e práticas integrantes do projeto político-ideológico de expansão da classe hegemônica. A função deles é obter o consenso das classes dominadas, garantindo a adesão e o consentimento ao projeto dominante. Para tanto, cria mecanismos e instituições próprias. Dentre elas, são as mais importantes

a escola, como função educativa positiva, e os tribunais, como função educativa repressiva e negativa, (...) na realidade, tendem para este fim uma multiplicidade de outras iniciativas e de outras atividades ditas privadas que formam o aparelho da hegemonia política e cultural das classes dominantes. (Gramsci, 2000, p. 284).



Para Gramsci, a construção da hegemonia de um grupo não se restringe às relações no terreno da economia, mas remete à formação de uma cultura que torna hegemônica e universal a visão de mundo de uma classe. É mais: tal hegemonia é compreendida como “[...] direção intelectual e moral e domínio político exercidos por uma classe, em determinadas condições históricas” (Abreu, 2002, p. 24). Para que haja a adesão das classes a um projeto econômico, social, político e cultural que consolide a hegemonia de uma classe, é necessário socializar valores, visões de mundo e da sociedade.

Assim, ensina Mészáros (2008), uma das principais funções da educação formal na sociedade capitalista é produzir conformidade ou consenso. O projeto burguês de educação, desde o final do século XVIII, já era fortemente marcado pela concepção de educação para as massas como fator de racionalização à vida econômica, à produção e ao tempo dessa produção. A educação do trabalhador é subsumida à necessidade do capital de reproduzir a força de trabalho como mercadoria.

Entendemos que a educação é determinada pelo modo de produção da vida material. Ou seja, as relações de produção e as forças produtivas são fundamentais para apreender o modo como os homens vivem, pensam e transmitem as ideias e os conhecimentos que têm sobre a vida e sobre a realidade natural e social. Para Gramsci (1991), todos os homens são filósofos, pois todos possuem uma dada concepção de mundo. A questão está, conscientemente ou não, em qual concepção de mundo da qual fazemos parte.

[...] É preferível ‘pensar’ sem disto ter consciência crítica, de uma maneira desagregada e ocasional, isto é, ‘participar’ de uma concepção de mundo ‘imposta’ mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um dos vários grupos sociais nos quais todos estão automaticamente envolvidos desde sua entrada no mundo consciente [...] ou é preferível elaborar a própria concepção de mundo de uma maneira crítica e consciente e, portanto, em ligação com este trabalho do próprio cérebro, escolher a própria esfera de atividade na produção da história do mundo, ser guia de si mesmo e não aceitar do exterior, passiva e servilmente, a marca da própria personalidade? (Gramsci, 1991. p. 12).

Para, então, explicitar a complexidade do processo de criação de uma nova cultura e para explicitar o momento da crítica e da consciência é que Gramsci (1999) aponta que

Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas ‘originais’, significa também, e, sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, “socializá-las”, por assim dizer; e, portanto, transformá-las em bases de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual. O fato de que uma multidão de homens



seja conduzida a pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade presente é um fato 'filosófico' bem mais importante e 'original' do que a descoberta, por parte de um "gênio" filosófico, de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos de intelectuais. (p. 13)

Assim, em relação à perspectiva da construção da hegemonia pelas classes subalternas, Gramsci dá destaque à construção de uma organização de uma nova cultura como um movimento necessário na constituição de uma nova hegemonia.

A construção da hegemonia insere-se em um quadro de reforma intelectual e moral, entendida como modo de ser, pensar e agir dos sujeitos, como um amplo movimento de crítica e destruição da cultura dominante e construção de uma nova cultura, na construção de uma vontade coletiva. Nesse sentido, Abreu (2019, p. 07) reflete

A vontade coletiva é, assim, a expressão de um processo de reforma intelectual e moral desenvolvido pelas classes subalternas, como a "consciência operosa da necessidade histórica como protagonista de um drama real e efetivo." (Gramsci, 2000a, p. 17). Constitui, portanto, uma categoria complexa onde se evidenciam os nexos contraditórios entre a base econômica e a superestrutura na constituição de um novo bloco histórico, de uma nova hegemonia – que se apresenta como "possibilidade inscrita na totalidade social" (DIAS, 1996, p. 14). Gramsci refere-se a esse movimento como "catarse", para indicar "a passagem do momento meramente econômico (egoístico-passional) ao momento ético-político, isto é, a elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Isto significa também, a passagem do 'objetivo ao subjetivo' e da 'necessidade à liberdade'. (Gramsci, 1999, p. 314).

Assim, coloca-se como necessidade histórica da classe trabalhadora a construção de um movimento cultural na perspectiva da organização das classes subalternas como classe hegemônica. O que implica, em um primeiro momento, rompimento com a ideologia dominante que se tornou senso comum. Para tanto, a educação libertadora torna-se um importante instrumento nesse processo.

O princípio educativo que nos vem de Marx, reforçado por Gramsci, aponta para uma unidade entre ensino e trabalho, cujo objetivo é preparar os trabalhadores para assumir o controle da sociedade, superando a dicotomia entre o pensar e o agir. Ou seja, entre a teoria e a prática.

Para um dos maiores educadores do Brasil, Paulo Freire, a escola tem o objetivo de ensinar o aluno a ler o mundo e a realidade que o rodeia para, assim, poder transformá-



lo. Para o autor, a educação como prática especificamente humana, é uma forma de intervenção no mundo, e afirma

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da História. (Freire, 1998, p. 60)

Assim, essa proposta de educação popular formulada por Paulo Freire tem como princípio educativo de que toda a aprendizagem e todo o ensino devem partir da realidade tendo como principais objetivos transformar a realidade das classes subalternas. Mas, segundo Freire (1981), esse processo só será possível quando o povo se reconhecer como sujeito de sua própria história. Isto é, entender a educação como um ato de conhecimento e de transformação política ou, como nos ensina Gramsci (1999) trata-se da “passagem do saber ao compreender, ao sentir, e, vice-versa, do sentir ao compreender, ao saber” (p. 221).

É com base nessa concepção que o Movimento dos Trabalhadores (as) Rurais Sem Terra (MST) vem desenvolvendo práticas educativas com uma concepção de educação popular fundamentada em Paulo Freire, a partir de uma educação voltada para a realidade do povo, suas experiências de vida, com vista a construir uma educação como prática libertadora. Essa concepção está assinalada em um dos documentos do Movimento intitulado “Como fazer a escola que queremos”, onde se destaca:

Realidade é o meio em vivemos. É tudo aquilo que fazemos, pensamos, dizemos e sentimos na nossa vida prática. É o nosso trabalho. É a nossa organização. É a natureza que nos cerca. São as pessoas e o que acontecem com elas. São os nossos problemas do dia a dia, também os problemas da sociedade que se relaciona com nossa vida pessoal e coletiva (MST, s/d, p. 02).

Dessa forma, parte-se de uma proposta educacional problematizadora da realidade que aponte para o desvelamento e a transformação da realidade, em um movimento de unidade entre teoria e prática. Fica evidente, assim, que o MST busca construir uma proposta de educação comprometida com a consciência histórica dos sujeitos a partir dos desvelamentos da luta de classes no campo, na qual deve ser enfrentada com organização e luta.

Como materialidade deste compromisso, o Movimento coordena a Jornada de Alfabetização do Estado do Maranhão, sobre o que será tratado a seguir.



Brigada Salete Moreno: Uma experiência político pedagógica de alfabetização

É público o compromisso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) com a educação. Com iniciativas nos vários níveis de educação e ensino, em parcerias com inúmeras instituições de ensino, tem contribuído com o processo de educação e formação das famílias sem terra no país, com formação desde a alfabetização até cursos de pós-graduação em várias áreas do conhecimento. No Maranhão, teve suas iniciativas na educação formal, ainda na década de 1990, com a Educação de Jovens e Adultos, através de uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).

Com base teórica referenciada em uma educação libertadora e tendo reconhecida sua proposta político pedagógica, em 2007 coordenou a Campanha de Alfabetização nas Áreas de Assentamentos e Acampamentos de Reforma Agrária no Estado do Maranhão, uma iniciativa do então governador Jackson Lago (2007 - 2009), com a ideia de um projeto piloto de erradicação do analfabetismo em áreas de reforma agrária. Atualmente, com o governo Flávio Dino (2014 -), coordena a Jornada de Alfabetização do Maranhão, ação que compõe o Plano Mais IDH, carro chefe da política de elevação de indicadores sociais e econômicos do atual governo e no caso específico para contribuir com a redução dos altos índices de analfabetismo no estado.

O Plano Mais IDH compreende um conjunto de ações destinadas a elevar os indicadores dos 30 municípios com piores indicadores do estado, sendo que concentram 6,2% da população estadual, mas possuem 10,4% da população extremamente pobre (IMESC, 2016, p. 65). Além disso, no que se refere ao analfabetismo é observado que “todos os 30 municípios apresentaram taxas superiores a do Estado (20,5%) em 2010. Ressalta-se que o município que apresentou a menor taxa foi Cajari (21,8%), e a maior taxa observada foi no município de Marajá do Sena (40%)” (IMESC, 2016, p. 48)

Em comum às duas iniciativas a contribuição dos métodos *Sim, eu Posso!* e *Círculos de Cultura*. O primeiro, método cubano de alfabetização; o segundo orientado pelo pedagogo Paulo Freire. O distinto, na primeira, tratava de ação dirigida à superação do analfabetismo em áreas de reforma agrária e, devido às circunstâncias de impedimento político jurídico do governador, a experiência foi interrompida; na atual, são ações mais amplas, que alcançam municípios inteiros. Na primeira fase a Jornada, conforme Silva e outros (2017, p. 11), o trabalho realizado envolveu 9.492 alfabetizandos, 628 alfabetizadores; 71 coordenadores de turmas e 20 brigadistas de 10 estados brasileiros,



alfabetizando mais de 7 mil pessoas em 8 municípios, sendo a meta para a segunda fase, 1.332 turmas de alfabetização, 20.075 educandos, 190 coordenadores de turmas e 37 brigadistas, para alfabetizar vinte mil pessoas em 15 municípios, com o desafio de, em oito municípios, superar o analfabetismo, fato jamais registrado no estado. Os sujeitos organizados na Ação compõem a coordenação pedagógica, coordenação de turmas, alfabetizadores e alfabetizados.

A Brigada Salete Moreno é composta por militantes do Movimento Sem Terra e homenageia a assentada da reforma agrária, pedagoga da terra, dirigente estadual do MST, que atuava, principalmente, na área da educação. Morreu em acidente em 2009.

Aqui, destacamos a proposta político pedagógica da Jornada de Alfabetização, que, como foi dito, é responsabilidade do MST e como para este Movimento educação é mais que saber ler as letras, a alfabetização é mais que o aletramento ou a decodificação da leitura e da escrita. E, como “Há uma vinculação direta da condição da pobreza, do latifúndio e da desigualdade social com a existência de pessoas que não sabem ler e nem escrever” (Araújo, 2012, p. 251), lembramos que no campo se concentra o analfabetismo, assim

Ao ousar a alfabetizar os adultos e elevar a sua escolaridade tendo como horizonte não apenas a qualificação para a força de trabalho, os movimentos de lutas sociais no campo demonstram que a emancipação não se dará apenas por meio da conquista econômica, mas, ao lado das conquistas econômicas, é necessário também a elevação cultural e qualificação de consciência, demonstrando assim, a função da educação e da escola e movimento. (Araújo, 2012, p. 256).

Compreendendo, ainda, que o analfabetismo “não é uma condição individual, mas produto de uma sociedade extremamente desigual, mantida por um sistema de dominação social do qual a ignorância é um dos pilares.” (Silva *et al*, 2017, p. 08), o MST assumiu a tarefa de organizar este processo, com a formação da Brigada Salete Moreno, composta de militantes de vários estados brasileiros, que encontram-se distribuídos nos municípios foco da Jornada. Ressalta-se que este grupo de militantes deixam suas tarefas políticas, sociais e familiares em suas regiões, para cumprirem uma deliberação política do MST de alfabetizar, por acreditar que “a emancipação de um povo passa, necessariamente, pelo acesso ao conhecimento produzido historicamente pela humanidade” (Silva *et al*, 2017, p. 08).

O projeto político pedagógico proposto quebra paradigmas de culpabilização do sujeito não alfabetizado e de jargões de que não há mais tempo para tal, como “papagaio velho



não aprende a falar”, enfatizando que “sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar”, conforme a música “Sempre é tempo de aprender”, de Zé Pinto. Para tanto, como já dito, utiliza o método *Sim, eu Posso!* e os *Círculos de Cultura*.

A alfabetização tem início com a utilização do método *Sim, eu posso!*, método criado na década de 1990, orientado pela campanha de alfabetização no processo revolucionário cubano, que erradicou o analfabetismo no país. Cuba, com sua cultura de solidariedade internacionalista, através do método *Sim, eu posso!*, contribuiu com a alfabetização em mais de trinta países, ajudando a Venezuela ser declarada território livre do analfabetismo em 2005. O método foi adotado por países de diversidade cultural, econômica e política em várias regiões do mundo, como África do Sul, Argentina, Bahamas, Bolívia, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Equador, Espanha, Granada, Guatemala, Guiné Bissau, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Moçambique, Nicarágua, Nigéria, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, República Dominicana e Timor Leste.

No Brasil, o MST já desenvolveu alfabetização com o método cubano em assentamentos da Bahia, Ceará, Pernambuco, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e no próprio Maranhão. Neste, a Ação estadual, alcança 15 municípios de baixo IDH, envolve comunidades e populações historicamente excluídas dos serviços públicos, como quilombolas, indígenas, extrativistas e ribeirinhos. Destaca-se que são mais de mil e oitocentos indígenas em processo de alfabetização.

O método se efetiva no sentido de alfabetizar a população em sessenta e seis aulas, com atividades diárias de duas horas, quatro vezes por semana. Importante que a intenção no processo é “socializar o processo de alfabetização, de modo que cada um se sinta parte dele, contextualizando suas tradições culturais, sua identidade, aproveitando os conhecimentos construídos pelos educandos ao longo de suas vidas” (Silva, 2017, p. 10).

Após esta fase, segue-se com o os *Círculos de Cultura*, com duração de quatro meses, cujo objetivo é “além da continuidade do processo de alfabetização, iniciar o processo de leitura e escrita convencional, a partir da leitura do mundo e da cultura local”, contribuindo “coletivamente com a valorização da cultura dos sujeitos envolvidos, bem como estimular os educandos e educadores a continuarem seus estudos e sua escolarização” (Silva, 2017, p. 15).



Os *Círculos de Cultura*, como prática educativa, têm início nas experiências de alfabetização de jovens e adultos no contexto político da década de 1960, tendo papel de destaque Paulo Freire, para quem pensar criticamente a constituição social e o próprio ser humano é condição para a transformação da sociedade. Ou seja, para Freire, conforme (Silva, 2018), a prática educativa está intrinsecamente articulada com a cultura, “já que a educação não é mera transmissão de conhecimentos, de decodificação de letras e sim um aprender a ler o mundo, leitura que se faz coletivamente, de forma dialógica, onde se aprende e se ensina a um só tempo.” (p. 4). Assim, os *Círculos de Cultura* são formados com o sentido da igualdade e da partilha, sem posição de privilégio, com todos se olhando e podendo aprender e ensinar com a socialização de suas experiências.

A dinâmica dos *Círculos* é permeada de música e poesias, provocando para além da reflexão crítica dos processos, o resgate de manifestações culturais de cada grupo e comunidade envolvida na ação pedagógica. E, a participação de todos os sujeitos no processo de alfabetização reforma a ideia freiriana de que “as classes populares têm dois direitos básicos: o direito de conhecer melhor o que já sabem, em razão da própria prática e o direito de participar, de algum modo, do processo de produção do conhecimento novo” (Freire apud Camargo, 2016, p.22).

Para garantir o método, são feitos levantamentos a partir das realidades que mais se aproximam, a fim de serem definidos eixos temáticos a serem problematizados a partir do tema ou de uma palavra, com material de apoio referente, como música, vídeo, poesia. Como indicação de uma educação libertadora, destaca-se os depoimentos de educadoras (os) e educandas (os), por ocasião do Seminário de Encerramento Estadual da Jornada de Alfabetização do Maranhão, onde avós e pais, alfabetizados por suas filhas (os) e netas (os), em depoimentos evidenciam a satisfação em romper com o estigma e o preconceito do não saber ler; além da exigência feita ao Estado de continuidade da Ação, mas para além da alfabetização, pensada aí, o avanço dos estudos.

Também se pode perceber a importância deste processo em depoimentos feitos ao Jornal Brasil de Fato por várias trabalhadoras e trabalhadores destes municípios, como “a coisa que mais achei bom na vida foi ir pra escola”, “quem não sabe [ler] vive no mundo só pra dizer que está vivendo, mas não sabe de nada. É como se estivesse no escuro, entendeu? A gente vê as coisas, mas não sabe o que é”, “a melhor parte do meu dia é esta, a hora em que eu venho pra aula”.



Os resultados apontam, ainda, a perspectiva da cidadania, o que é evidenciado em situações como a exigência de pessoas alfabetizadas exigindo substituição de carteira de identidade e fazendo questão de assinar esta documentação, que antes lhes identificavam como pessoa “analfabeta”. Apesar de parecer algo simples, tal fato altera em muita a concepção da pessoa alfabetizada acerca do mundo e de suas relações na sociedade.

Considerações

A formação da cultura é mediada, dentre outras coisas, pela educação. Os valores disseminados pela ordem social hegemônica têm sido propagados ideologicamente por processos formativos e educativos organizados pelas classes burguesas. Estrategicamente, as classes subalternizadas têm organizado espaços e metodologias que se contrapõem à educação acrítica imposta pelos padrões tradicionais instituídos.

O MST, ao assumir, através da coordenação da Jornada, a responsabilidade de contribuir com o processo de alfabetização de jovens e adultos no Maranhão, cumpre a tarefa de construir uma educação com princípios e metodológicos com intencionalidade política, adotando a educação popular como estratégia de superar o doutrinamento ou o dogmatismo, como um caminho político para que a classe oprimida possa libertar-se e assim, construir uma sociedade livre, pois com sua liberdade, liberta o opressor, como preconizava Freire.

Com este compromisso para além das áreas de reforma agrária, o MST se pauta na necessidade de ir para além da luta corporativa das famílias camponesas, entendendo seu papel histórico de organizar as populações trabalhadoras a quem foram negados direitos humanos, sociais, políticos e culturais, sendo, para isto, a educação estratégia imprescindível.

A Jornada apresenta conquistas importantes para o processo de alfabetização em um estado caracterizadamente pobre. No entanto, considera-se a experiência mediada por contradições próprias do papel do Estado Moderno, enquanto sujeito garantidor da reprodução do capital. Acrescente-se a isto, limitações técnico-operativas da administração estatal, assim também, o descompromisso político de operadores da dinâmica com o projeto societário emancipador.

Conclui-se afirmando a necessidade de processos político pedagógicos que desencadeiem a formação de sujeitos críticos como a iniciativa em pauta, ainda que com limites e dificuldades, para que a nova sociedade possa se formar.



Referências

- Abreu, M. M (2019). A cultura no pensamento de Gramsci: elemento constituinte do movimento histórico real de organização política das classes sociais, como forças hegemônicas. Artigo apresentado no VIII Seminário Internacional de Teoria Política do Socialismo e II Colóquio Internacional Gramsci: as categorias teóricas de Antônio Gramsci e a verdade efetiva das coisas. 2019.
- Abreu, M.M (2002). Serviço Social e organização da cultura: perfis pedagógicos da prática profissional, São Paulo, Brasil: Cortez
- Araújo, M. N. R. (2012). Educação de Jovens e Adultos (EJA). In Caldart, R. S. e outros (org). Dicionário a Educação do Campo, São Paulo, Brasil: Expressão Popular.
- Caldart, R. S. Educação do Campo. In. Caldart, Roseli e outros (orgs). (2012) Dicionário da Educação do Campo, São Paulo, Brasil: Expressão Popular
- Camargo, M.S. de. (2016). Primeiras palavras: Paulo Freire passou aqui. In: Spigolon, N. I, e Campos, C. B. G. Círculos de Cultura: teorias, práticas e práxis, Curitiba, Brasil: CRV.
- Freire, P. (1998). Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa, Rio de Janeiro, Brasil: Paz e Terra.
- Freire, P. (1981). Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro, Brasil: Paz e Terra.
- Gramsci, A. (1999). **Cadernos do Cárcere. Introdução ao estudo da filosofia. A filosofia de Benedetto Croce**, Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira.
- Gramsci, A. (2.000). **Cadernos do cárcere: temas de Cultura, ação católica, americanismo e fordismo**, Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira.
- Gramsci, A. (1991). Concepção Dialética da História, Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira.
- Mészáros, I. (2008). A Educação para além do capital, São Paulo, Brasil: Boitempo.
- Mst. (1992). Cadernos de Educação n. 01. Como Fazer a Escola que Queremos. Mimeo.
- Paludo, C. (2012). Educação Popular. In. Caldart, Roseli e outros (orgs). (2012) Dicionário da Educação do Campo, São Paulo, Brasil: Expressão Popular
- Silva, E. P. S. e outros (2017). Jornada de Alfabetização do Maranhão: Sim, eu Posso! – Círculo de Cultura. Caderno de orientações pedagógicas e metodológicas da/o educadora/o.
- Silva, G. F. e outros. (2018). Caderno das Educadoras e Educadores. Jornada de Alfabetização do Maranhão: Sim, eu posso! – Círculos de Cultura. São Luis, Brasil.



Línea Temática 9.

Movimientos sociales, extractivismo, sustentabilidad y dinámicas de conflicto en torno a los territorios



Autonomía y autogestión como defensa del territorio en las comunidades adheridas al Comité Por La Defensa De Los Derechos Indígenas (CODEDI).

Luis Castillo Farjat¹

Resumen

Una de las principales demandas de los movimientos indígenas en México es el derecho de autogobernarse de acuerdo con sus usos y costumbres. Este reclamo cobra mayor relevancia ante la dinámica de despojo que ha adoptado el sistema capitalista, pues gran parte de los recursos naturales explotables se encuentra en aquellos territorios que han ocupado las comunidades indígenas. A pesar de la larga tradición de cooptación de las estructuras comunitarias por parte del estado, aún existen formas de autogobierno y sistemas de cargos tradicionales que permiten a las comunidades tener experiencias de gobierno horizontal regidas mayormente por lógicas asamblearias. No obstante, uno de los principales obstáculos para lograr implantar sistemas de autogobierno ha sido la dependencia económica, por lo que algunos movimientos autonomistas han gestado formas de autogestión productiva para lograr la autosuficiencia. El Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), está construyendo un sistema productivo basado en el *tequio* o trabajo colectivo y en la recuperación de formas de organización comunitaria. Aquí nos proponemos mostrar el modelo autogestionario del CODEDI como una estrategia de defensa del territorio y las principales contradicciones y retos de la organización en un escenario de incremento exponencial de la violencia.

Palabras clave

Autogestión; Defensa del territorio; Trabajo colectivo.

Palavras chave

Autogestão; Defesa do território; Trabalho coletivo.

Keywords

Workers' self-management; Territory defense; Collective work.

Del despojo a la autonomía

A finales del siglo XX en América Latina tomaron la palestra una serie de movimientos sociales, caracterizados por incluir nuevos métodos dentro de los repertorios de protesta



social. La eficacia de las movilizaciones contribuyó, cuando no instaron directamente, a la caída de varios gobiernos de la región instalándose en el poder partidos-movimiento de reciente creación o rescatando organizaciones populares históricas. Este periodo de “gobiernos progresistas” o “marea rosa” se sostuvieron en buena medida por la relación estrecha que tuvieron con esos movimientos sociales al tratar de incluir sus reclamos y demandas en la agenda pública o al incorporarlos en sus gobiernos.

Mientras que en esos países donde la izquierda logró tomar el poder estatal, la redefinición del pacto social se sustentó en la aplicación de políticas sociales, en los gobiernos más cercanos al canon neoliberal, el control social se llevó a cabo mediante la fuerza y la violencia en distintos grados y formas. No obstante, el avance en el reconocimiento de los derechos sociales y colectivos que se logró en varios de esos países gobernados bajo el signo de la izquierda, el paradigma de desarrollo no se modificó significativamente. Incluso, el modelo extractivista se refuncionalizó de acuerdo con las nuevas condiciones políticas de la región, llegándose a hablar de un nuevo extractivismo.

El Estado como elemento esencial del proceso de reproducción del capital, ha tenido un papel primordial en esta actualización del patrón de acumulación basado en el despojo y buena parte de la agenda de los movimientos sociales se encuentra marcada por las relaciones con éste. A grandes rasgos, los movimientos sociales han optado entre dos grandes posiciones: por un lado, la negociación y la interacción con instituciones políticas formales, por el otro, el antagonismo y la búsqueda de un horizonte autonomista. Cada sector ha jugado en momentos específicos entre ambas posiciones, situándose en un lado u otro de la balanza, o incluso moviéndose simultáneamente. Por ejemplo, con las peticiones y luchas dentro de canales institucionales para el reconocimiento legal del derecho a la autodeterminación o con la apropiación y refuncionalización de programas sociales para apuntalar procesos autonómicos.

Dentro de las organizaciones que tienden más hacia el establecimiento de autonomías, una de las mayores preocupaciones ha sido el sector productivo, o sea, ¿cómo lograr el sostenimiento material de los proyectos autónomos? ¿cómo lograr el pleno ejercicio de la autonomía? Ante esas disyuntivas cobra relevancia la búsqueda de formas alternativas de producir que eviten que las dinámicas de acumulación interfieran con los procesos autonomistas. En ese sentido, la propuesta de organizar la vida autónoma tiene que pasar por una perspectiva anticapitalista, más allá de las lógicas de acumulación.



En este mismo sentido, el ajuste espacio-temporal a la crisis de acumulación, como la llama David Harvey, conduce a nuevas formas de despojo. En este sentido, las regiones más amenazadas son aquellas que no se encontraban directamente en los canales de acumulación del capital, como, por ejemplo, las comunidades indígenas. Estos territorios ancestrales cuentan con recursos que representarían una gran fuente de acumulación para el capital. En ese sentido, los proyectos autonómicos representan una zona en disputa entre las comunidades más politizadas y diferentes manifestaciones del capital como empresarios locales, transnacionales narcotráfico, e incluso el propio estado.

La presente ponencia deviene de una investigación en curso sobre las prácticas comunitarias de trabajo colectivo como parte del proyecto político autonomista que enarbola el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) y las prácticas territoriales que desarrollan esta organización. En ese sentido pretendemos mostrar las problemáticas que ha tenido el CODEDI para sostener su proyecto autónomo frente a los embates del capital en las distintas manifestaciones ya mencionadas, poniendo énfasis en la deconstrucción de la categoría trabajo que se está realizando desde los pueblos de la costa y sierra sur, donde se ha instalado esa organización.

Las construcción de datos y buena parte de la propuesta conceptual provienen de reflexiones colectivas con diversos compañeros, de entrevistas formales, de grupos de estudio, de talleres de formación política, mapeos colectivos, de asambleas, de charlas informales en talleres productivos, fiestas, caminos, comunidades, pero también de jornadas de trabajo colectivo, de *tequio*, de jornadas en el campo, así como en manifestaciones, marchas, cierres de carreteras y otras manifestaciones organizativas y de solidaridad. Se ha tratado de caminar al lado de los compañeros, activa y críticamente, pero respetando las formas de trabajo, así como sus tiempos.

En cierto sentido la investigación ha sido influida por el paradigma de investigación militante, pero repensándola desde las propias condiciones que aquejan a las comunidades enclavadas en la sierra sur oaxaqueña y a la propia de investigador-estudiante. Si bien, se han hecho esfuerzos por eliminar las relaciones asimétricas de poder, la violencia simbólica que implica una investigación se manifiesta permanentemente. No obstante, los acuerdos realizados con los y las compañeras han permitido el acercamiento a la realidad de las comunidades donde tiene presencia la organización.



Despojo en condiciones de abigarramiento

Una de las particularidades más notables de la región latinoamericana es su condición de heterogeneidad estructural, concepto que alude a los diferentes modos de producción imbricados y coexistentes, aunque no excluidos de contradicciones. Si bien, el capitalismo se considera el modo de producción hegemónico, esto no implica que la lógica de acumulación vaya subsumiendo a las demás formas productivas, sino que encuentra una distinta manera de relacionarse con cada una de ellas.

René Zavaleta desarrolló la noción de abigarramiento para dar cuenta de esa situación, en la que en una formación social pueden convivir distintos modos de producción, aunque sin articularse entre ellos. La formación social abigarrada alude a la superposición de épocas económicas sin combinarse demasiado “como si el feudalismo perteneciera a una cultura y el capitalismo a otra, y ocurrieran sin embargo en el mismo escenario; o como si hubiera un país en el feudalismo y otro en el capitalismo, superpuestos y no combinados”.

Esa subsistencia de distintas formas de trabajo ha permitido que se mantengan diversas formas de organización de la vida. Si bien, se han mantenido modos de producción tributarios, cuasi feudales en los latifundios, así como patriarcales e incluso esclavistas, también se han mantenido formas de trabajo comunitario basados en la reciprocidad y solidaridad, sobre todo en comunidades indígenas. La permanencia de estructuras colectivas de la tenencia de la tierra, así como la organización en torno a cargos comunitarios o tomas de decisión del tipo asambleario, ha permitido formas de trabajo que regulan la vida más allá de las lógicas de acumulación de capital.

Sobre esa base organizativa varios movimientos indígenas han construido sus procesos de autonomía, pues ésta es una cuestión viva en la memoria de los pueblos, pues siempre se han orientado en torno a las formas comunitarias. Por esta razón, el autogobierno bajo usos y costumbres es una demanda que han enarbolado los movimientos sociales con identidades étnicas y que se han politizado sobre esa base.

Milton Santos propone el concepto de rugosidad para explicar históricamente la construcción espacial a partir del trabajo, o más bien, las formas en las cuales el trabajo ha actuado sobre el espacio históricamente. La rugosidad refiere a los restos de divisiones del trabajo ya pasadas, los restos de los tipos de capital utilizados y sus combinaciones técnicas y sociales con el trabajo. “La actual distribución territorial del trabajo descansa sobre las divisiones territoriales del trabajo anteriores. Y la división



social del trabajo no puede entenderse sin la explicación de la división territorial del trabajo, que depende, a su vez, de las formas geográficas heredadas”.

En el caso concreto que nos atañe, en el espacio social existente entre los pueblos de la costa y la sierra sur de Oaxaca, puede observarse las marcas históricas del despojo, lo cual ha determinado las posibilidades de los actores para actuar sobre el territorio. El mapa del despojo se remonta a la época colonial, en donde se desarticuló el control vertical de los pisos ecológicos que ejercían los pueblos zapotecos, mixtecos y nahuas, permitiendo el intercambio cultural y económico entre la costa y la sierra. Dicha dislocación fue originada, en gran medida, por la introducción de la grana cochinilla como monocultivo, lo cual representó un primer despojo de tierras de los pueblos de la región, así como el establecimiento de Huatulco, como puerto de comercio de esclavos y mercaderías ilegales hacia Guatemala, Perú y Ecuador.

A mediados del siglo XIX ante la caída del mercado internacional de los colorantes de la grana, condujo a empresarios de Miahuatlán a la introducción del café en la región, no sin resistencia por parte de varios pueblos, como por ejemplo la zona de los Loxicha. Con el gobierno del estado se negoció la introducción del aromático en las zonas altas de Xanica y Ozolotepec. Con ayuda gubernamental, los pueblos fueron despojados de sus tierras para la fundación de fincas cafetaleras que terminaron ejerciendo un dominio cuasi feudal, desarticulando la organización colectiva de la tierra, prohibiendo el cultivo de milpa, imponiendo la lógica del monocultivo.

De igual forma, el establecimiento del Centro Integralmente Planeado de Huatulco en 1984, despojó de tierras a los comuneros de San Miguel del Puerto y Santa María Huatulco para convertirlas en un espacio turístico internacional reconfigurando la dinámica socioeconómica de la zona. El CIP se gestó con la sangre de los pueblos despojados, pero también con las negociaciones del gobierno con grupos ecologistas, permaneciendo la idea de recuperación de las tierras, así como la protección del ambiente. En ese momento comienza el declive en los precios del café, que terminan poniendo en crisis a las fincas productoras de la región; muchas de ellas fueron abandonadas y los trabajadores perdieron empleos e indemnizaciones.

La configuración espacial que ha realizado el capital sobre los pueblos que se encuentran entre la costa sierra sur de Oaxaca se encuentra profundamente marcada por el despojo, como vía para dislocar a las comunidades e insertarlas dentro de la lógica de acumulación. Sin embargo, ante cada proceso de despojo han surgido resistencias que se incrustan en el territorio y en la memoria de las comunidades. Uno



de esos casos es el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), quienes se encuentran construyendo un proceso de autonomía, basado en el trabajo colectivo y en la recuperación de formas de organización comunal.

Autogestión y territorio

Desde los últimos años del siglo XX, el concepto de la autogestión ha pretendido utilizarse desde el mundo empresarial, como estrategia de productividad laboral en el patrón de acumulación flexible. Este uso conceptual pretende borrar el antecedente histórico de la autogestión, más encaminado a la producción autónoma y colectiva, contribuyendo a la separación entre las esferas política y económica. La separación entre lo político y lo económico es una estrategia para apuntalar la dominación en ambos espacios, mostrando ambas dimensiones separadas, como si en la realidad eso pudiera delimitarse.

El trabajo lleva de fondo una carga política muy fuerte, dependiendo de la forma en la que se realice, como trabajo asalariado, trabajo colectivo o trabajo comunitario, sea en una empresa capitalista, de forma esclava, o sea en un proyecto liberador. La autogestión “trasciende la mera administración de una empresa por parte de los trabajadores puesto que incluye el objetivo de una gestión integral de la sociedad”. En ese sentido, la autogestión es otra de las caras de la autonomía, la capacidad de organizar el trabajo de acuerdo a las necesidades propias y a los mecanismos de decisión.

En el campo de los movimientos sociales se han dado interesantes reflexiones sobre las maneras de sostener la resistencia y los proyectos que pretendan establecer. Muchos de los movimientos terminan en fracaso por carecer de las bases materiales para su sostenimiento, y, en ese sentido, la autogestión es una manera de sobrellevar esta situación, pero también, la capacidad de generar su sostenimiento material significa la propia organización más allá de las lógicas de acumulación de capital, o al menos, una visión alternativa y colectiva.

Los ejemplos de movimientos sociales que han llegado a la autogestión y a poner énfasis en la reproducción de la se extienden cada vez más por toda América Latina, pero, sobre todo, han tenido un arraigo entre las organizaciones indígenas. Esto debido, principalmente, a que las comunidades tienen una larga experiencia de estructuras diferentes al capitalismo y muchas de ellas están reivindicando sus formas comunales de organización. Para Benjamín Maldonado existe una plena identificación entre autonomía y autogestión, que se observa en la lucha indígena



hoy la lucha india en México es por autonomía y la autonomía no puede ser entendida sin autogestión, por lo que el anarquismo –en tanto corriente de pensamiento y como experiencias históricas– tiene mucho que aportar en el alumbramiento de la nueva sociedad mexicana; la más consistente corriente anarquista en México, el magonismo, puede ser una forma de identidad capaz de recoger experiencias en función de nuevos planes.

Los ámbitos comunitarios y la práctica de la comunalidad son formas de relaciones sociales, donde la autonomía se expresa como algo vivo y que tiene una base histórica profunda en la organización de los pueblos. “Una fuerza de tal magnitud fundamenta prácticas socioeconómicas autogestivas. La participación colectiva es en cualquier lado la base de la autogestión”. La comunidad es una relación social que implica ciertas prácticas territoriales, pues no puede pensarse sin un territorio. La cuestión que define el territorio es el poder, o sea, las relaciones de poder espacializadas y por ende conflictivas. Los territorios son creaciones sociales de diversos grupos y actores que se encuentran en conflicto.

De acuerdo con Bernardo Mançano Fernandes, el concepto de territorio tiene varios principios: *soberanía* como construcción histórica de pueblos y naciones, así como de clases sociales y sus grupos internos; *totalidad*, en tanto territorio como un todo, parte de la realidad con múltiples dimensiones; *multidimensionalidad* o las condiciones construidas por los sujetos en prácticas sociales en relación en la naturaleza y entre sí; *pluriescalaridad*, como distintos niveles de organización territorial; *intencionalidad*, como opción histórica de decisiones, una posición política; y, *conflictualidad* o relaciones de enfrentamiento en las interpretaciones que objetivan las permanencias y superaciones de clases sociales, grupos, instituciones, espacios y territorios.

Esto sugiere que cada grupo o pueblo tiene sus propias prácticas territoriales, con un proyecto político de fondo, que hace entrar en conflicto con otras prácticas territoriales. La idea de territorio que ejercen los niveles de gobierno son distintas a las prácticas territoriales de diversas organizaciones o de grupos de poder. La territorialización que lleva a cabo el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas se ha sostenido a base del trabajo colectivo, concretamente del tequio de esa organización y lo ha enfrentado a otros grupos, desde grupos empresariales, el gobierno federal, o grupos del crimen organizado, con distintas prácticas territoriales.



Defensa del territorio

A raíz de la intromisión e imposición del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones por usos y costumbres que se llevaban a cabo en Santiago Xanica para elegir los cargos comunitarios del cabildo, se generan varios procesos. Por un lado, entre la población surge un sector que actúa con base a prebendas y que funciona como operadores políticos del PRI, pero también, otro grupo que pretende recuperar las formas de organización tradicionales, derivadas del trabajo comunitario o *tequio*, el sistema de cargos comunitarios, así como la toma de decisiones del tipo asambleario. De esta última fracción surge el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), que al poco tiempo participa en la creación de un cabildo popular, luego de expulsar a los priistas del palacio municipal.

Desde ese momento, el CODEDI va trabajando la idea autonomía, como vía para reorganizar al pueblo de Xanica de forma comunitaria. Por ejemplo, durante el periodo del cabildo popular en Xanica, el CODEDI contribuyó al establecimiento de un bachillerato comunitario, así como una biblioteca y una farmacia, además de la recuperación del *tequio* para las obras de infraestructura del poblado. Sin embargo, la pelea por el control del municipio continuaba entre grupos priistas y los defensores de los usos y costumbres, lo cual significaba el control de recursos municipales.

Los trabajos del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas se extendieron más allá de la lucha por retomar los métodos comunitarios de organización política del municipio, hacia el campo educativo, la gestión de la salud y los proyectos productivos, al igual que crecía su área de influencia hacia comunidades aledañas de municipios cercanos. Ante la necesidad de tener un espacio para que la organización pudiera llevar a cabo el proyecto de comunalizar la tierra y trabajarla bajo formas colectivas de *tequio*, se decide recuperar las tierras de la Finca Alemania, que llevaba 20 años en el abandono. Esta decisión se tomó en conjunto con los extrabajadores de la, otrora, finca cafetalera más importante de la región, así como con las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO).

La toma de la Finca Alemania y su posterior reactivación como Centro de Capacitación marcó la pauta para crear un proyecto de defensa territorial a cargo del CODEDI. El Centro de Capacitación, ha crecido exponencialmente gracias al trabajo colectivo de la organización y, sobre todo, al *tequio* de las 37 comunidades adheridas. Dentro de dicho centro se ha establecido un sistema de educación autónoma, desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, hasta el proyecto de una universidad para los



pueblos. Paralelo a esto se han creado 14 talleres de capacitación colectiva, donde los alumnos aprenden un oficio y se vuelven responsables de los trabajos que requieran las comunidades adheridas, que van desde zootecnia, apicultura, carpintería, mecánica, corte y confección, panadería, salud, etc.

De igual forma, las 700 hectáreas de las que se compone la finca Alemania están siendo ocupadas en su totalidad por los proyectos productivos, basados en sistemas agroforestales, que no agotan la fertilidad natural, sino que contribuyen a recuperar el frágil equilibrio ecosistémico de la región. Muy a grandes rasgos describiremos las principales prácticas territoriales que ha empleado el CODEDI, como defensa frente a la ofensiva espacial del capital en la zona de la costa y sierra sur de Oaxaca.

Las estrategias territoriales del CODEDI comenzaron en el pueblo de Xanica, donde nace la organización, y en un primer momento se trata de recuperar la tradición comunitaria que había sido socavada por la destrucción de la propiedad colectiva de la tierra, a mediados del siglo XX, sobre todo por el negocio cafetalero. En ese sentido, si bien no se ha logrado recolectivizar la tierra, si se han impulsado prácticas de trabajo colectivo y formas de organización basados en el sistema de cargos, así como la toma de decisiones de forma asamblearia. Esto ha permitido que se lleven a cabo obras de infraestructura en el pueblo, a partir del *tequio*, sobre todo, en lo que refiere a los caminos hacia la cabecera municipal.

Los trabajos de la organización en torno a la vivienda, también han generado una reconfiguración territorial a partir del cambio de paisaje. El CODEDI ha construido hasta el momento más de 5 mil viviendas en las comunidades adheridas, con el propio trabajo de las comunidades, también organizado por *tequio*. La construcción de vivienda se realiza haciendo la disputa al estado de fondos federales para conseguir material, pero también gracias a la fabricación de ladrillos y puertas y ventanas que se realiza en el Centro de Capacitación. Cabe mencionar que la construcción de viviendas se realiza por comunidades, para evitar formas de clientelismo, recuperando las formas colectivas de organización del trabajo.

El trabajo realizado en las comunidades pretende, al igual que en Xanica, retomar las formas tradicionales de organización, y gracias al trabajo de vivienda se ha recuperado el *tequio*. Hasta el momento hay 37 comunidades adheridas al proyecto de CODEDI, las cuales participan en los *tequios* dentro de la propia comunidad o en los proyectos de la organización. Las comunidades adheridas se organizan en torno a los trabajos que requiere el Centro de Capacitación, pero también a partir de los *tequios* que se realizan



en cada comunidad. Muchas comunidades están destinando parte de las tierras comunales para la siembra de determinados cultivos para enviarlos a la organización.

En cierto sentido, el CODEDI ha tomado el control vertical de pisos ecológicos, que había sido desarticulado desde la dinámica colonial y ahora existe una mayor comunicación e intercambios entre las comunidades de la costa, de la sierra, valles centrales e istmo. Asimismo, la dinámica intracomunitaria incentivada por la organización, ha contribuido a llevar a cabo ciertas acciones para evitar la degradación ambiental. Por ejemplo, se ha estimulado la construcción de baños secos en las comunidades, así como eliminar los fertilizantes derivados del petróleo, además de frenar la caza incontrolada. El Comité se ha encargado de organizar talleres y cursos de formación política en las comunidades para defender los ríos de la zona, concretamente el Copalita tanto de los proyectos hidroeléctricos, como de su entubamiento para asegurar el consumo de las hoteleras de la costa, pero también de la contaminación de las comunidades de la sierra, para conservar limpio el afluente para las comunidades de las tierras bajas.

La toma de la Finca Alemania, ha representado el mayor proceso territorial que ha realizado la organización. Primeramente, por haber recuperado un espacio abandonado a causa de los vaivenes en el mercado internacional de café, pero sobre todo por mostrar que las comunidades organizadas pueden hacerse cargo de más de 600 hectáreas, desde el tequio y a partir de las formas tradicionales de cultivo. Esto ha implicado, un enfrentamiento directo con los empresarios de la zona quienes pretendían apoderarse de la finca para abastecer de agua a los negocios en el Centro Integralmente Planeado de Huatulco, pero también de grupos del crimen organizado, quienes se dedicaron a saquear la región del árbol de granadillo, destinado al mercado mundial para la construcción de objetos de lujo.

Tanto por el establecimiento de talleres colectivos donde se organiza el trabajo de la finca, como por los cultivos y proyectos ganaderos dentro el perímetro de la finca, un espacio abandonado se transformó en un centro de contacto entre las comunidades, que también es sede de una radio comunitaria y de varios proyectos de capacitación a los que pueden acudir los pobladores de las comunidades aledañas, no solo adherentes a la organización. Pero también, se cuentan dos proyectos de territorialización importantes entre los trabajos del CODEDI, que son, la recuperación de las 23mil hectáreas de las que fueron despojados los comuneros de San Miguel del Puerto para la construcción del CIP y también la recuperación y creación de una playa comunitaria



en Salchí, para que las comunidades que han sido despojadas de la costa, tengan acceso al mar.

Conclusiones

A modo de conclusión podemos señalar que los movimientos sociales en América Latina y concretamente en México existe una reivindicación territorial, sobre todo, entre los movimientos indígenas, que al politizarse han desembocado en procesos de autonomía. Estos procesos han fructificado como una respuesta a las ofensivas territoriales del capital, que ha avanzado por la vía del despojo sobre aquellos espacios que no se encontraban tan integrados o integrados de forma marginal, a los procesos de acumulación. También mencionar que las condiciones de abigarramiento presentes en México permitieron que las prácticas autonomistas, presentes en el concepto de usos y costumbres son una realidad presente en la memoria colectiva de los pueblos y que, varias organizaciones y movimientos sociales han incentivado la recuperación de esas formas organizativas, existentes y funcionales para las manifestaciones comunitarias. El CODEDI ha sido una muestra de estos procesos, tratando de recuperar las formas comunitarias de organización, desde la formación de cabildos populares donde la toma de decisiones sea de forma asamblearia y bajo el sistema de cargos comunitarios rotativos, vistos como servicio a la comunidad. Pero también, las formas de organización del trabajo colectivo como el *tequio* y la *mano vuelta*, destinados a la reproducción de la vida, volviéndose un freno a las dinámicas de acumulación de capital. La defensa territorial en su conjunto ha logrado, hasta el momento, ponerle un freno a la lógica de despojo que se ha presentado por conflictos de tierras, expropiaciones, así como megaproyectos hidroeléctricos o mineros.

La dinámica expansiva que requiere el capital ha tenido en las practicas territoriales del CODEDI un freno, sobre todo en el turismo, que ha sido la modalidad predilecta para asegurar la acumulación en la zona de Huatulco. Sin embargo, los conflictos permanecen, generando choques cada vez más violentos, entre quienes buscan la ganancia mediante la explotación del trabajo del hombre y de la naturaleza y quienes buscan la supervivencia de las prácticas tradicionales para engendrar un mundo diferente basado en la solidaridad, apoyo mutuo y valores comunitarios.

Notas

¹ luis.castillo.farjat@gmail.com. El Colegio de San Luis, México



Bibliografía

- Colectivo Situaciones, "Sobre el militante investigador" *Retrieved December, 26, 2012.*
- Hudson, Pablo, "Formulaciones teórico-conceptuales de la autogestión", *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 72, No. 4, 2010.
- Maldonado, Benjamín, "Comunalidad y responsabilidad autogestiva", *Cuadernos del sur*, No. 34, 2013.
- Maldonado, Benjamín, "El indio y lo indio en el pensamiento magonista", *Cuadernos del sur*, No.15, 2000.
- Murra, John V., *La teoría de la complementariedad vertical eco-simbiótica*, La Paz, Hisbol, 1987.
- Santos, Milton, *La naturaleza del espacio: técnica y tiempo. razón y emoción*, Barcelona, Ariel, 1997.
- Talledos, Edgar, *Huatulco. Espacio y tiempo*, San Luis Potosí, Colsan, 2017.
- Zavaleta, René, *La autodeterminación de las masas*, México, Siglo XXI, 2015.



Hegemonía y resistencia. Conflictos territoriales en el caso de las comunas étnicas de la costa ecuatoriana

Marie-Therese Lager

Resumen

La expansión de la industria turística (producto de las políticas públicas que actúan bajo el marco del desarrollo), ha sido notable en los últimos 20 años en la costa ecuatoriana, con el resultado de la mercantilización de las tierras comunales. La necesidad de cubrir sus gastos diarios y su deseo de progresar, han llevado al comunero a vender sus tierras, produciéndose un crecimiento del individualismo y de la competencia. Todo esto se suma a un marcado desinterés de los jóvenes por la comuna y su poca participación en trabajos comunitarios, lo que hace tambalear los pilares que sostienen la organización comunal: la solidaridad y la existencia de bienes comunales. Este panorama es mostrado a través de dos casos empíricos: las Comunas Montañita y Engabao, donde se dibuja la importancia que tienen los conflictos de tierras para el fortalecimiento y la revitalización de la cohesión social y construcción identitaria de las comunidades étnicas. En ambos casos se plantea cómo la acción social se desprende de la resistencia y la lucha por un objetivo en común: las tierras comunales. Los datos obtenidos son el resultado de un trabajo etnográfico, llevado a cabo durante los últimos cinco años, que ha analizado las estrategias de defensa de estas comunas desde el ámbito local y político-jurídico. El texto integra una reflexión en torno al capitalismo y analiza desde una mirada decolonial los procesos locales de resistencia a partir de las apropiaciones territoriales

Palabras clave

Etnicidad; Territorio; Comunas étnicas; Resistencia; Decolonialidad.

El escenario

En las provincias de Guayas y sobretodo en la provincia de Santa Elena, ubicada en la costa de Ecuador, existe una multitud de comunidades étnicas que a partir de la Ley de Organización y Régimen comunal del 1937 fueron legalizadas como Comunas. Hoy, en Santa Elena, existen 68 Comunas que se rigen bajo esta Ley que reconoce su autonomía territorial y prohíbe el fraccionamiento de sus tierras comunales. Varios de sus artículos especifican que ningún notario puede extender escrituras públicas porque se trata de bienes colectivos. Las Comunas actúan como un “mini gobierno” que poseen



una directiva que llama a asambleas o reuniones comunales, que tienen lugar una vez al mes (Álvarez, 1991). Las resoluciones se toman mediante votación entre miembros afiliados a la Comuna en estos espacios, es así como su administración sobre territorio y bienes comunales se llevan a cabo de manera democrática y comunitaria.

La Ley de Comunas surgió en un momento en que el Estado Nación ecuatoriano, bajo políticas liberales, buscaba integrar al indígena (Prieto, 2004). En la década de los 80, los mapas etnográficos ecuatorianos estaban vacíos de pueblos indígenas en una gran parte de la región costera de Ecuador. A los habitantes de esta región costera se los denominaba “cholos” (Álvarez, 2014b). Casi 30 años después, la actual Constitución con el lema del “Socialismo del siglo XXI” se pronunció a favor de la salvaguarda y protecciones de los grupos étnicos apuntalando su carácter plurinacional. En la Constitución del 2008 se menciona que las tierras comunales son imprescriptibles, inalienables, inembargables e indivisibles (Constitución de la República de Ecuador, 2008).

Las comunas de estas provincias son étnicas porque conllevan un posicionamiento territorial ininterrumpido desde tiempos pre-coloniales. A partir de la imposición colonial, marcadores étnicos visibles como lenguaje o “traje típico” desaparecieron como resultado de la adaptación a los patrones hegemónicos. Para Álvarez (2016b) la aculturación de estos grupos étnicos debe ser leída como una negociación permanente con los grupos de poder que les permitía resistir. En este sentido, los signos de la etnicidad muchas veces se solapan, interconectan o incluso se contradicen entre sí con el fin de obtener reconocimiento y derechos de existencia. El territorio consta como marcador principal de una identidad étnica que perdura (Álvarez, 1991). Junto al territorio geográfico se anclan la memoria compartida de la pertenencia única y legítima de estas tierras. Las formas de convivencia de las comunas están basadas en un sentido de hermandad, reciprocidad y solidaridad que se expresan a través de actividades cotidianas como mingas y fiestas comunitarias. “Aunque tenemos diferentes apellidos, todos tenemos un mismo sentir” (Comunera 1, Comuna Montañita, 16.2.2019).

Estas comunas hasta hace 30 años eran agrícolas y ganaderas, pero empezaron a integrarse a la industria turística como resultado de una larga sequía que terminó con su fuente principal de subsistencia (Álvarez, 2010). A partir de la llegada de personas de “afuera” que mostraron interés en la compra de tierras comunales se empezó a desarrollar el turismo. A través de un Estado ausente, por necesidades económicas personales y para obtener infraestructura básica, las Comunas empezaron a entrar al



mercado de tierras. Este ha sido el caso de la Comuna Montañita que hoy es reconocida a nivel nacional e internacional como “meca” turística de surf y diversión nocturna (Lager, 2016).

Cuanto más se desarrolló el turismo más subió el valor monetario de los suelos y su mercantilización. Actualmente nos encontramos ante un escenario en el cual el Estado, debido a su interés de aumentar el turismo en la zona costera, promueve sus encantos biodiversos de la zona y busca inversionistas nacionales, pero sobre todo internacionales, que pueden aportar al desarrollo. Estas políticas facilitan y dinamizan la participación extranjera al eximir la paga de impuestos a los grandes inversionistas extranjeros.

Problemática y planteamiento

El ingreso de patrones occidentales, bajo el paraguas del capitalismo global (turismo, políticas públicas y medios de comunicación), contribuye a un debilitamiento de su autonomía y han vuelto frágil el tejido social comunitario. Intereses personales son guiados por el deseo de progresar y acumular capital monetario. La dependencia al mercado causó competencia y lentamente reemplazó valores como solidaridad y apoyo mutuo. Hoy se puede observar cómo muchos jóvenes se desentienden de la participación comunal y no asisten a las asambleas. Al entrevistarlos señalan su desinterés o falta de tiempo por tener que trabajar en los negocios o tener que preocuparse primero por su familia y después por la comunidad como razones que justifican esta ausencia. Es notable que el valor funcional del territorio (ver las tierras como un bien mercantil) antecede a su valor simbólico y sociocultural (entenderlo como parte integral de su identidad personal y comunitaria, y espacio de convivencia que debe permanecer para las futuras generaciones). Eso evidencia su disposición a la venta territorial.

Estas razones hacen suponer que las comunas se conducen a la “descomunalización” producida en otras regiones de Ecuador (Figueroa, 2014), la desintegración de lo comunitario y sistemas comunales ante un mundo de individualismo, competencia y mercado. Por lo tanto, uno se pregunta ¿de qué manera lo comunal puede permanecer y persistir en la actualidad bajo el discurso global capitalista?

Para responder esta pregunta se vuelve necesario el análisis de los conflictos territoriales; sus causas, las respuestas estatales y sus mecanismos de defensa y resistencias comunales a nivel local y jurídico, lo que nos lleva también a plantear que los conflictos territoriales provocan acciones de cohesión social y desafío colectivo en



reacción a las amenazas externas (Lager, 2019). De manera simultánea se fortalecen valores como “solidaridad” y “hermandad”, trayendo de vuelta a un primer plano la noción del territorio como espacio sociocultural que tiene que perdurar como posesión comunal para las generaciones futuras.

El análisis se lleva a cabo a partir de dos ejemplos empíricos: los conflictos de tierras a las que se enfrentaron la Comuna Montañita, en la Provincia de Santa Elena, y la Comuna Engabao, en la Provincia de Guayas, se analizan los discursos de defensa al nivel jurídico y al nivel local en correlación y respuesta a las políticas públicas del Estado ecuatoriano. La información se levantó a través de entrevistas semi-estructuradas, conversaciones informales, revisión de archivos que incluyen actas jurídicas de los conflictos de tierras y observaciones (participantes). Lo expuesto es resultado de mi trabajo etnográfico de los últimos cinco años y forma parte de mi investigación doctoral, señalando que no se trata de una investigación continua sino de una presencia en diferentes momentos durante este tiempo.

Desde una mirada decolonial e intercultural (Escobar, 2016; Restrepo y Rojas, 2010; Walsh, 2005) se quiere conceptualizar lo que se entiende como “discurso hegemónico”, lo que lleva hacia la elaboración de una crítica a la visión eurocéntrica, exponiendo cómo desde esta mirada se construye “etnicidad”. En este sentido se plantea lo siguiente: primero, que desde lo jurídico y político el carácter étnico únicamente es reconocido a través de marcadores visibles que subrayan su otredad en relación al blanco- mestizo. Segundo, que aunque el Estado del Ecuador es declarado “plurinacional” actúa bajo criterios y miradas eurocentristas que integran un orden jerárquico basado en categorías como raza, clase, etnicidad y género. Por lo tanto, para reclamar sus derechos territoriales por ancestralidad las comunas tienen que reivindicar su etnicidad al subrayar y visibilizar su diferencia. Así mismo al ser diferente, se ubican en una posición inferior ante el “blanco-mestizo” (Lager, 2019).

Asimismo, se quiere mostrar que, si bien las realidades diversas viven bajo la sombra del capitalismo global, existen prácticas localizadas y ancladas al lugar que no pueden ser explicadas únicamente en términos de racionalidad, mercado e individualismo (Escobar, 2010). En este sentido, se hace énfasis en acciones colectivas que en el marco de las defensas territoriales, se desprenden desde el lugar y para el lugar (Escobar, 2010; Garzón, 2008). Con esto se quiere dibujar realidades que no se construyen ni al exterior del sistema hegemónico ni totalmente ocupado por él, sino como parte integral y en correlación (Escobar, 2004). Desde la perspectiva subalterna



se hace énfasis en su actuar que más bien muestra una yuxtaposición entre lo global y lo local.

Modernidad/Colonialidad: Una crítica al discurso hegemónico

El discurso hegemónico, también conceptualizado como “modernidad/colonialidad” (Mignolo, 2005), se manifiesta en el *habitus* y se construye en relación al sistema dominante. La colonialidad es efecto de la colonización pero no terminó con ella. Sigue vigente y es inmanente a la modernidad, a nuestro estado actual de vida y convivencia. En este sentido hablamos de la colonialidad del poder, la deshumanización e inferiorización de ciertas partes de la población; la colonialidad del saber, la subalternización de otras modalidades de conocimientos; y la colonialidad del ser, la experiencia vivida de los subalternos y sectores dominantes. Naturaleza las jerarquías sociales impuestas y el no cuestionamiento del paradigma de la humanidad (Quijano, 2000).

El discurso hegemónico integra centrales, entre ellos la hegemonía económica, definida como “capitalismo global”, que refiere a una “cultura universal de consumo” marcada por relaciones impersonales basadas en contratos y no en compromisos personales, en la cual, como menciona Bauman, acaban todas las ideas de felicidad en una tienda (Suarez, 2016). Según Castro- Gómez (2007) ha alcanzado en tiempos actuales de globalización su mayor nivel de expansión, de tal manera que no existe prácticamente ningún lugar habitado de la tierra que no sea escenario de su presencia material y simbólica.

En el caso de las comunidades étnicas de la costa ecuatoriana, la hegemonía económica es notable a través del crecimiento de la industria turística. Se materializa en la construcción de grandes condominios y hoteles. El florecimiento de la industria turística es resultado de los cambios de la matriz productiva propuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir (2008), con el objetivo de construir una realidad pos- petrolera. Actualmente, dentro del Plan de Desarrollo Turístico, el gobierno ecuatoriano busca potencializar la inversión extranjera y privada a través del proyecto “Riviera del Pacifico”, que se apoya a la idea de la “Riviera de Maya” en México: 120 kilómetros de playas en el caribe mexicano, con 400 hoteles de nivel internacional que recibieron alrededor de 8 millones de turistas internacionales en el 2017 (Ministerio de Turismo, 2018). Con esto se expanden espacios en las cuales la producción y el consumismo están ubicados en el mismo lugar (Clavé, 2007).



Otro de estos ejes es la mirada eurocéntrica, basada en un modelo de conocimiento que representa la experiencia histórica europea (Escobar, 2004). Se refiere a la construcción de conocimientos expertos que han sido separados de lo natural y lo divino. Integran la lógica del desarrollo, que cree en la superación de un estado “primitivo” hacia lo “moderno” que se debe hacer mediante la aplicación de políticas y acciones de modernización.

El sistema mundo es binario, lo que quiere decir que existe una normativa materializada a través del sujeto masculino, blanco y su contraparte declarada como “Otro”. El polo que incluye al “otro” en su campo de operaciones es el dominante (Hall, 2015, p. 420). “Dichas relaciones han sido pensadas como desiguales, de polos opuestos, donde el poder reside en el ámbito global despojando a lo local de toda posibilidad de interacción, dejándolo solamente la opción pasiva de buscar una inserción en lo global” (Garzón, 2008, p. 101). En este sentido éste “Otro” incorpora todo aquello que es rechazado por la norma. Es caracterizado como “lacra social”, “inculto”, “vago”, “mal educado”, “pobre” incluso “vulnerable”, “frágil”, “necesitado”. Lo expuesto no es algo desconocido. Más bien se evidencia a diario a través de prácticas cotidianas de un Estado monocultural y homogéneo.

Finalmente, otro eje es la naturalización de jerarquías a través categorías impuestas. Características fenotípicas, culturales, políticas y sociales occidentales son consideradas superiores y dominantes. De esa manera el “cholo”, el “indio”, el “negro” es ubicado en una posición inferior. Esta condición no cambió con la actual Constitución (Constitución de la República de Ecuador, 2008) aunque ésta declara cuestionar las premisas fundamentales del desarrollismo hegemónico y propone una nueva ética de parte de una sociedad plurinacional donde se destaca la interculturalidad como principio rector de las acciones a llevar a cabo (Plan Nacional del Buen Vivir en Álvarez, 2016a: 338).

Según Walsh (2005) la interculturalidad es algo que aún no ha llegado, no se trata simplemente de reconocer o tolerar al otro o a la diferencia, sino de impulsar activamente un proceso de intercambio igualitario que permite construir espacios entre seres, saberes, sentidos y prácticas diversas. Es un proyecto y proceso que busca construir modos otros del poder, saber y ser y transformar las estructuras e instituciones que posicionan grupos, prácticas y pensamientos dentro de un orden y lógica que es racial, moderno y colonial. Cuestiona las estructuras dominantes y busca una



transformación real. Este discurso, según la autora, queda ausente cuando la interculturalidad esta asumida dentro de políticas y discursos multi- y pluriculturalistas.

Es importante anotar que hasta hoy tanto el dominado como el que domina siguen reproduciendo estructuras, prácticas y concepciones coloniales. Esto se hace evidente a través de la manera de cómo (desde lo *emic* y desde lo *etic*) se construye la imagen del “indígena” o de “lo étnico”. El indígena es concebido a partir de existencias estáticas y fijas que parecen flotar por encima de procesos históricos y asumen un fenómeno inmutable (Riviera, 2003, p. 375). Hablamos de construcciones mentales desde diversos lugares de poder, realizadas por quienes no son indios (Mendoza- García, 2006, p. 253). Estos esquemas se siguen reproduciendo desde los grupos “afectados” y desde los grupos de poder, lo que desvaloriza al sometido y, por lo contrario, valora a opresor, ayudando a las clasificaciones de población, diseños y estrategias de violencia (simbólica).

La defensa territorial al nivel jurídico

Lo planteado, se evidencia también en los espacios de conflictos territoriales y sus acciones de defensa al nivel jurídico. Engabao desde hace 30 años lleva un conflicto de tierras liderado por un empresario ecuatoriano de mucho poder económico. Este conflicto se potenció hace cinco años atrás cuando el empresario empezó a poblar los sectores en conflictos (300 hectáreas de tierras comunales). La comunidad realizó múltiples denuncias a las autoridades y los medios de comunicación, pero sin éxito. Los argumentos de defensa se fundamentaron en el Art. 57 de la actual Constitución (Constitución de la Republica Ecuatoriana, 2008) y en el Art.21 de la Ley de Comunas que prohíbe a los notarios y registradores públicos extender escrituras públicas en relación a los bienes colectivos de las Comunas (Ley de Comunas, 1937). Así mismo hacían referencia al Art. 77 de la Ley orgánica de tierras Rurales y Territorio ancestrales en la cual se reconoce la posesión ancestral del territorio comunal en los términos previstos de la Constitución y convenios internaciones de derechos colectivos a favor de las comunas, pueblos y nacionalidades étnicas (Ley orgánica de tierras rurales y territorio ancestrales, 2016).

Accedieron a todas las instancias correspondientes, administrativas, judicial como constitucional en la cual se reconocían los derechos y propiedad a favor de la comuna y se ha reconocido la ilegitimidad de la empresa. Así determinó la sentencia de la corte constitucional el reconocimiento del dominio, de la propiedad comunal. Sin embargo, en varias acciones se han podido evidenciar actos de corrupción contra Engabao. Sobre



esa sentencia se realizó una remedia jurídica por parte del empresario y se presentó nuevamente una acción de protección. Este caso presenció cómo el poder económico se adueñó también de los jueces.

Como estrategia de defensa dentro del espacio jurídico se puede percibir la reivindicación identitaria a través de marcadores visibles que se enmarcan en estereotipos que responden a una visión eurocéntrica: en ceremonias y desfiles, el pueblo se muestra con trajes “típicos”, además se empezó a usar la imagen del “Cacique Túmbala” (héroe indígena que representa la historia, cultura e identidad de la Comuna). Esta figura y su historia eran desconocidas para la población, no fue sino a raíz del reciente conflicto que los activistas introdujeron la figura del cacique como símbolo de resistencia (comunitaria y étnica). Ahora ellos dicen que son los hijos de Tumbalá y que defienden sus tierras como lo hacían él y sus caciques, sus abuelos y antepasados (Entrevista a Comunero 3, Comuna Engabao, 22 de abril de 2017).

Similitudes en relación a la reivindicación y visibilización étnica como respuesta a los conflictos territoriales también encontramos en Montañita: La exhibición de “trajes típicos” en ceremonias y la implementación de un nombre que subraya su identidad étnica. Esto porque en el caso de Ecuador se admite la existencia étnica cuando manifestara parámetros culturalistas, a partir de la presencia o ausencia de marcadores legitimados como propios. Así mismo se declaran extinguidos aquellos grupos que se consideraban en sus manifestaciones como “aculturados”, y con ello se suprimía de la etnografía una parte importante de la población que actualmente ocupa la región de la costa (Álvarez, 2016b). Hoy se identifican como “comunidades ancestrales” o “pueblos guancavilcas”, lemas para poder acceder a los derechos constituidos. Los indígenas siempre necesitaron de un nombre que los distinguiera frente al grupo blanco que imponía las reglas económicas y los valores morales y culturales (Álvarez, 2016b). Sin embargo, en sus testimonios se puede presenciar un desconocimiento sobre su pasado precolonial, aunque existen varios estudios y escritos sobre este tema.

Montañita se enfrentó en el 2005 a un litigio de tierras con una empresa privada que terminó en el 2014 a su favor (Lager, 2016). La comunidad denunció la empresa refiriéndose al Art. 57 de la Constitución que declara “la imprescriptibilidad de las tierras comunales y ancestrales” (Constitución de la República Ecuatoriana, 2008). Como respuesta, el Juez negó la denuncia con el argumento que las Comunidades de la costa comparada con las de la Sierra y Amazonia no son ni ancestrales ni étnicas porque no han mantenidos “condiciones puras” ni una “identidad autóctona” (Juicio de



demarcación de linderos No. 102, 2011: 4). El análisis de las acciones de defensa al nivel jurídico muestra que la construcción de “lo étnico” (por parte de las comunidades) y la concepción del “indígena” (por parte de los jueces) reproducen el discurso hegemónico. Da la idea de un callejón sin salida porque no propone cambios verdaderos, estructurales y no cuestiona las estructuras dominantes. Tampoco da pautas para modos y condiciones de pensar diferente. Por lo tanto, surgen las preguntas ¿es posible imaginarnos alternativas a la totalidad hegemónica imputada? ¿Son las comunidades de la costa ecuatoriana espacios de transformación que nos ofrecen a partir de su vivir diario insumos para el diseño de una realidad otra?

“Estamos por un buen camino”: La defensa territorial desde lo local “Estábamos jodidos, no teníamos plata para nada, ni para pagar el juicio. Pero cada vez que nos uníamos salió la frase: “a pesar de todo estamos por un buen camino”, (Entrevista a Ex dirigente de Libertador Bolívar, 13.4.2019).

Para encontrar una salida del “callejón sin salida” es necesario pluralizar, problematizar y desafiar la idea de un pensamiento único, totalitario o universal, enmarcado en una postura política y ética (Walsh, 2005: 48). Además, confrontar la subordinación de las distintas lógicas y modos de vida, saberes y prácticas. Llevar la atención a conocimientos colectivos y acciones colectivas que se producen al nivel local y desde una posición de subordinación. Desarrollar una mirada basada en y desde el lugar como herramienta interpretativa que pone su enfoque en las prácticas localizadas.

En este sentido, el “lugar” debe ser entendido a partir de una correlación con lo global, integral al discurso hegemónico. Son cuatro los elementos que lo definen (Garzón, 2008): La localidad, el marco en el que se inscriben las relaciones sociales; la ubicación, el espacio geográfico concreto; el sentido del lugar, la componente intangible/ simbólico (el territorio como marcador de su identidad individual y conjunta); El cotidiano, la acción social. Asimismo, al actuar desde un lugar se puede integrar a una postura política-social compartida, lo que hace posible el reclamo de autonomía, de su derecho de “poder ser”, de vivir y actuar bajo sus lógicas propias, reclamar voz y voto. “No soy yo. Son mis antepasados que me dan la energía para actuar en defensa de lo que es nuestro (el territorio comunal)” (Entrevista a Comunero de Valdivia, 24.7.2018). Al actuar para el lugar se logra integrar el sentido del lugar, el significado que se le ha dado. Debe ser entendido tanto a partir de su valor simbólico/ cultural como a través de su valor funcional/mercantil. “Hay que defender la tierra, hay que pelear por la identidad.



Nuestros territorios es legado ancestral, es el legado mayor de nuestros antepasados” (Entrevista a Ex dirigente de Libertador Bolívar, 13.4.2019).

El lugar es imaginado y parte de una experiencia vital, es donde se generan formas propias/ particulares de actuar y pensar, que son compartidas entre sus miembros. La pertenencia al lugar se caracteriza a partir de un conocimiento y sentir inherente, que es transmitido de generación en generación. La pertenencia al lugar y su sentir pueden ser observados en momentos concretos de las defensas territoriales. Estas acciones de defensa se basan en la reapropiación territorial y la reconstrucción y reinención identitaria como grupo étnico (Lager, 2019). Se reclaman e imponen sus propias miradas y lógicas como una forma de resistencia ante los poderes. En el caso de Engabao, estas acciones se observaron a través de una acción: la quema de casas en el sector que ha sido, según sus criterios, ilícitamente poblados por el empresario, mientras gritaron “un pueblo unido, jamás será vencido”.

Montañita en cambio se enfrentó a más de 700 policías que trataron de ejecutar un orden de desalojo. En este momento, jóvenes, adultos y mayores de la Comunidad se juntaron en la calle y crearon un muro para que la policía no avance, logrando impedir el desalojo. “Montañita se mide por la unidad que ha sido fortaleza para mantener resistencia, para cuidar y luchar por nuestra comuna ancestral” (Comunero 2, Comuna Montañita, 16. 6. 2014).

En estos espacios se articulan proyectos y prácticas colectivas por la afirmación y reafirmación del ser (el derecho a un espacio para “poder ser”), el derecho al territorio, el derecho al ejercicio del ser, su autonomía, y una visión propia de futuro, de desarrollo, de las relaciones sociales (Escobar, 2003). “La Comuna somos nosotros. Nosotros nacimos aquí, crecimos aquí y vivimos aquí. Nosotros decidimos sobre nosotros mismos” (Entrevista a Comunero 3, Comuna Montañita,

12. 5. 2014). Así se activa una red de relaciones para la defensa territorial que revitaliza la cohesión social y el sentido comunitario; “el saberse capaces de realizar acciones unidos” (Álvarez, 2010: 49).

Luchar desde y para el lugar incorpora un reconocimiento que entiende sus territorios como sitio donde se expresan culturas vivas, economías y un medio ambiente diverso, que se oponen a la idea de un sistema capitalista global y totalizante; se articulan formas alternativas de vida y visiones que se alejan de nuestra mirada binaria. Muestra que los lugares fallan de ser totalmente capitalistas y que en esto subyace el potencial de



devenir en algo diferente. “Los abuelos no es que murieron, aun los sentimos. Esa gente como yo, está ahí, y esa gente son parte de la resistencia. Las comunas somos parte de la resistencia” (Ex dirigente de Libertador Bolívar, 13.4.2019).

Conclusión

Dos preguntas centrales guiaron este análisis: Por un lado, se requirió responder de qué manera las comunas pueden sobrevivir y permanecer en el futuro. Por otro, se preguntó si las comunas pueden ser ejemplos de transformación social, política y estructural. Se ha planteado que las comunas, aunque mantienen aún su autonomía y posesión territorial bajo lógicas y formas de vida propias, forman parte integral del sistema global hegemónico y no pueden ser vistos como espacios excluidos ni como ejemplos contra-hegemónicos. La mercantilización territorial ha demostrado de qué manera el sistema global capitalista influye en su actuar y pensar cotidiano.

Dentro de este panorama se confirma que los conflictos territoriales crean un campo de análisis que permite darnos cuenta cómo se reviven y revitalizan valores que parecen disminuidos y perdidos, cómo se activa el valor simbólico del territorio y junto con esto su sentido de pertenencia territorial. Se ha podido observar que en estos momentos se crean espacios de resistencia al reclamar autonomía territorial. La lucha comunitaria por su territorio es también la defensa de un espacio de convivencia, de la memoria del pasado, y con ello de su herencia e identidad como grupo étnico.

Las prácticas basadas en lugar, en el marco de los conflictos territoriales, surgen de un sentir compartido que se relaciona con una posesión territorial y una memoria transmitida de generación en generación que deben ser leídos “en el marco de condiciones de oposición a los sectores dominantes con los cuales compiten” (Álvarez, 2016b). Muestran que los lugares no son totalmente mercantiles ni funcionales. De esa manera el espacio geográfico se convierte en un lugar de referencia colectiva que a la vez le permite la reproducción social, simbólica y también (pero no únicamente) económica y consta como marcador político de identidad frente a otros grupos (Álvarez, 2016b). Deviene de una lógica propia que no puede ser comparada con el discurso oficial de “ancestralidad” que se enmarca en el paradigma hegemónico. Todo lo contrario, más bien, se aleja de la idea de entidades fijas y estáticas que flotan por encima de tiempo y espacio. Muestran entidades que se crean y recrean como parte integral del mismo.

El análisis de las defensas territoriales a nivel jurídico, nos ha permitido conocer que aún el Estado ecuatoriano está lejos de aplicar políticas realmente interculturales. La



manera como “lo étnico” y “el indígena” es imaginado y representado refleja esquemas mentales, valores culturales y políticas poseedoras de un discurso estatal homogéneo que busca el dominio sobre un “otro”, lo que se articula también en la manera de cómo las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas reproducen su identidad para que su “otredad” sea reconocida, y poder acceder a las leyes constitucionales protectoras. Estas organizaciones según Álvarez (2016b) se ven obligadas a mostrar evidencias de ancestralidad y adoptar los parámetros de alteridad que es exige arbitrariamente desde el campo dominante. De esa manera la cultura se convierte en un baluarte que guía las demandas colectivas fundamentadas en los derechos a la diferencia al incorporar la dimensión étnica en los mecanismos del Estado y con ello la “etnización de lo político”.

Sin embargo considero que se requiere aun un análisis adicional para determinar si las prácticas y valores, surgidos o revitalizados en espacios concretos de conflictos territoriales, sigan o no presentes después de los conflictos, dejando un impacto para la sobrevivencia y persistencia de las comunas en el futuro. Esto implica saber si las tierras “recuperan” su valor simbólico aún después de las confrontaciones, o si una vez recuperadas estas vuelven a ser parte del mercado.

Bibliografía

Álvarez, S. (2016a). “¿Es posible un patrimonio cultural para el Sumak Kawsay? Un largo camino por recorrer”. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural Nr.1, vol. 14: 285-299.

(2016b): La importancia de tener nombre: identidad y derechos territoriales para las Comunas de Santa Elena, Ecuador, en: Revista de Antropología Experimental 16 (22): 325-352.

(2010). Representaciones, saberes y gestión de los recursos naturales y culturales, a nivel local. Tomo IV. Quito: Abya Yala, ESPOL.

(1991). Los comuneros de Santa Elena. Tierra, familia y propiedad. Quito: Corporación Editora Nacional.

Castro-Gómez, S. (2007). “Michel Foucault y la colonialidad del poder” En Tabula Rasa N.º 6: 153-172.

Clavé, S. A. (2007). A propósito del turismo: La construcción social del espacio turístico. Barcelona: UOC.

Constitución de la República Ecuador. Publicada en Registro oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. Quito.

Escobar, A. (2016): Autonomía y diseño. La realización de lo comunal. Colombia:



Universidad del Cauca

(2010): Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes. Colombia, Envión.

(2004): "Más allá del tercer mundo: Globalidad imperial, colonialidad global y movimientos sociales anti- globalización" En Nomadas, Nr. 20: 86-100

(2003) "Mundos y conocimientos de otro modo" En Tabularasa. Nr.4: 51-86

Figueroa, J. A. (2014). "La comunidad y sus desafíos políticos en una democracia radical". Íconos N° 49: 141-154.

Garzón, M. A. (2008). "El lugar como política y las políticas de lugar. Herramientas para pensar el lugar" En Signo y pensamiento, Vol. 27: 92-103.

Hall, S. (2015). "El espectáculo del otro" En Estudios culturales. Ecuador Corporación editorial nacional: 431-457.

Juicio de Demarcación de linderos No. 102. Sentencia del Juicio de Demarcación de Linderos. Publicada en Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil, del 10 de febrero de 2011. Santa Elena.

Lager, M.-T. (2019). "Hegemonía y resistencia. Conflictos territoriales en el caso de las comunas étnicas de la costa ecuatoriana" En Periferia Nr. 1, Vol. 24: 4- 27.

Lager, M.-T. (2016). Montañita. Una comuna entre territorio, identidad y turismo. Abya Yala, Quito- Ecuador.

Ley de Organización y Régimen de las Comunas. Registro oficial del Ecuador. Quito: 1937.

Ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. Registro oficial del Ecuador. Quito: 2016

Mignolo, W. (2005). La idea de América Latina. La herida colonial y la oposición decolonial. Barcelona: Gedisa Editorial.

Mendoza- García, J. (2006). "Movimientos sociales: entre la resistencia y la confrontación, entre lo privado y lo público" Polis: 179-215.

Ministerio de Turismo (2018). Ministerio de Turismo busca inversores para proyecto Riviera del Pacífico. Quito: Ministerio del Turismo. Recuperado de: <<https://bit.ly/3nmhEwy>>.

Prieto, M. (2004). Liberalismo y temor. Imaginando los sujetos indígenas en el Ecuador postcolonial, 1895-1950. Quito: Abya Yala.

Quijano, A. (2000): Kolonialitaet der Macht, Eurozentrismus und Lateinamerika. Wien/Berlin: Turia+Kant.

Restrepo E. y Rojas A. (2010). Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos. Colombia: Colección políticas de la alteridad.



Rivera Vélez, F. (2003). "Los indigenismos en Ecuador: de paternalismo y otras representaciones En: Simón Pachano (ed.) Antología. Ciudadanía e identidad. Ecuador: FLACSO.

Suarez, G. (2016). Bauman: "En el mundo actual todas las ideas de felicidad acaban en una tienda". El Mundo, Recuperado de: <<https://www.elmundo.es/papel/lideres/2016/11/07/58205c8ae5fdeaed768b45d0.html>>.

Walsh, C. (2005). Interculturalidad, colonialidad y educación. Revista Educación y Pedagogía, (19)48, 25-35



Las organizaciones de la sociedad civil en el conflicto socioambiental del Río Sonora: Trasfondo de un derrame minero.

Crisel Lugo Gil

Resumen

La investigación ha tenido como objetivo analizar la acción colectiva desarrollada a partir de la formación e inserción de organizaciones de la sociedad civil en el Río Sonora, derivado del conflicto socioambiental provocado por el derrame minero en agosto del 2014, con la finalidad de determinar si puede catalogarse como un movimiento social.

La minería a gran escala como actividad extractiva, es portadora de conflictos socioambientales en las regiones donde se asienta. En México, el estado de Sonora es el líder en producción minera (Camimex, 2014). En 2014, la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, permitió el derrame 40 mil metros cúbicos de contaminantes, incidente calificado como el peor desastre ambiental de la industria minera moderna en México (Enciso, 2014).

La cultura de apropiación masiva de la Naturaleza es tan profunda que los costos ambientales, sociales y políticos de la actividad extractiva no son asumidos por el Estado, ni por las empresas (Gudynas, 2011; Acosta, 2012). La inconformidad de la población del río Sonora ante la actuación de las autoridades y de la empresa minera, se ha visibilizado a través de la organización de protestas y movilizaciones sociales (Vega-Deloya, 2017).

Se aplicó una variación de la metodología de intervención sociológica de Alain Touraine. Se identificaron actores y organizaciones provenientes de la sociedad civil, así como los espacios de confrontación; también se analizó la trayectoria de las redes de colaboración de los primeros 4 años de la problemática.

Palabras clave

Acción colectiva; Movimiento social; Conflicto socioambiental.

Introducción

La minería a gran escala como actividad extractiva, es portadora de conflictos socioambientales en las regiones donde se asienta. En el año 2018, en Latinoamérica existen 248 conflictos mineros, de los cuales 44 se desarrollan en México y 3 específicamente en el estado de Sonora (ocmal, 2018). El estado de Sonora posee una gran riqueza en términos de recursos minerales, cuenta con 32 minas con un valor total



de la producción de 65, 790 millones de pesos y genera 17, 497 empleos directos (Camimex, 2014). Es el estado líder en producción minera a nivel nacional con el 23% de la superficie asignado a través de 5 mil concesiones y contribuye al Producto Interno Bruto estatal en un 17% (Gobierno del estado de Sonora, 2018).

En el mes de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México (GM), permitió el derrame de contaminantes, calificado como el peor desastre ambiental de la industria minera moderna en México (Enciso, 2014). Un total de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado fueron vertidos en el arroyo Tinajas (17.6 km), contaminando además cuerpos de agua interrelacionados como el Río Bacanuchi (64 Km), Río Sonora (190 Km) y la presa El Molinito (15.4 millones de m³). Se afectó directamente a 7 municipios asentados en la cuenca del Río Sonora, con una población de aproximadamente 22 mil habitantes (Semarnat, 2014).

Partiendo de esta trama se planteó una investigación para estudiar el espacio, los actores y los adversarios en un conflicto socioambiental originado a partir de los desacuerdos entre los habitantes de la zona afectada, el Estado y la empresa minera responsable del derrame. El análisis se centra en las acciones de la población ante la inconformidad sobre la actuación de las autoridades y de la empresa minera, así como su visibilización a través de la organización de protestas y movilizaciones sociales (Vega-Deloya, 2017). Se proyecta cerrar la investigación en diciembre del 2019, por lo que a través del presente texto se presenta un reporte de las etapas finales de la misma.

Planteamiento sobre los actores y adversarios en el Río Sonora

La cultura de apropiación masiva de la Naturaleza es tan profunda que los costos ambientales, sociales y políticos de la actividad extractiva no son asumidos por el Estado, ni por las empresas (Gudynas, 2011; Acosta, 2012). Ante el derrame de 40 mil metros cúbicos de cobre acidulado en el río Sonora, se visibilizaron tres actores: la mina Buenavista del Cobre SA de CV, subsidiaria de Grupo México; las instituciones en materia ambiental como representantes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

La empresa Buenavista del Cobre SA de CV es la tercera mina de cobre más grande del mundo, es operada por Grupo México, el cuarto productor de cobre a nivel mundial y el primero en México (Grupo México, 2018). Las acciones de esta empresa ante el derrame de agosto del 2014 han sido criticadas y desvalorizadas por la prensa y las autoridades (Lammers, 2014; Semarnat, 2014).



La presencia del Estado se observó, en primer lugar, a través de la atención de la Unidad Estatal de Protección Civil (uepc), que actuó ante los llamados de la población motivados por la mancha rojiza observable en la superficie de las aguas del Río Sonora (Lara y Rodríguez, 2015). Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa) clausuró las presas de jales de donde se originó el derrame, además de presentar una denuncia penal contra la empresa como responsable del incidente (Escobar, Arvizu y Nieto, 2014). Posteriormente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó constituir una Comisión Especial para dar seguimiento a los derrames al Río Sonora y se integró un Fideicomiso Río Sonora por de 2 mil millones de pesos (Lara y Rodríguez, 2015; Cofepris, 2015).

A partir del derrame, la visibilización de la sociedad civil se realizó por medio de acciones colectivas en los diferentes pueblos del Río Sonora, aunado a esto se vigorizó la protesta de los trabajadores pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (smtmmssrm) Sección 65, uniendo esfuerzos y desarrollando movilizaciones en conjunto (Escobar, 2014a). A menos de un mes de la problemática se inició una acción legal parte de los ciudadanos (Escobar, 2014b); también se realizaron bloqueos carreteros en Mazocahui, Aconchi, Baviácora y Ures (Escobar, 2014c).

En una segunda etapa de organización de la sociedad civil se integraron los Comités de Cuenca del Río Sonora (ccrs), grupo informal y autónomo que no guarda relación con los consejos o comités de cuenca encargados de la gestión del agua en el territorio nacional (Vega-Deloya, 2017). Por medio de este grupo los habitantes de los siete municipios afectados han mantenido actividades constantes para visibilizar la problemática, han realizado acciones de concientización en la zona afectada y han participado en eventos realizados fuera de su territorio (ccrs, 2016).

Esta problemática también recibió atención de organizaciones de la sociedad civil externas, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (poder), organismo no gubernamental que tiene como objetivo apoyar a los actores sociales afectados por prácticas empresariales, con sede en la Ciudad de México, ha desarrollado una relación de acompañamiento con los ccrs (ccrs, 2017). También hubo acercamiento y apoyo por parte de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente A.C. (rfsa), y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Escobar, 2014d) que tienen sede en la capital del estado.



En un ambiente de desconfianza y discursos dispares surgen dudas sobre la capacidad del Estado y sus instituciones para representar los deseos de la población, enmarcada en un contexto donde el sistema económico mundial trabaja en contra de la naturaleza y el medio ambiente. El problema de investigación que se plantea es analizar la acción colectiva surgida por la movilización de las organizaciones de la sociedad civil formales e informales, locales y no locales, originada a partir del derrame que afectó 271 kilómetros de la cuenca del Río Sonora con la finalidad de determinar si la acción colectiva desarrollada puede catalogarse como un movimiento social. Lo anterior, en resistencia de las acciones de las instituciones Estatales y del sector minero, como representantes de un modelo de desarrollo extractivista.

Sociedad civil, movimiento social y conflicto socioambiental

El concepto de sociedad civil ha sido retomado como alternativa a los ideales de reforma o revolución que han sido deshonrados por los partidos políticos, y representa una opción de defensa y autoorganización al margen del Estado, así como para la construcción de una vida pública no mediada por el mismo y erigida desde abajo (Cohen y Arato, 2000; Arato, 1996)

Las generalidades del concepto han llevado a su confusión con el de sociedad política, aunque se diferencia por su posición ante el poder; en este aspecto Olvera (2001) señala que, aunque éste es el fin último de la sociedad política, para la sociedad civil es solamente un medio para lograr sus objetivos. Para fines de este análisis es fundamental diferenciar los términos de sociedad civil y sociedad política, pero también considerar la relación estrecha entre ambos conceptos y los altos niveles de correlación que podrían presentarse en su estudio.

Uno de los constructores de las nuevas teorías de la sociedad civil, Habermas, se lamenta en sus publicaciones por la falta de una definición clara de un concepto de absoluta relevancia y gran tradición académica. Su propuesta es elemental y se centra en la independencia de la sociedad civil sobre el Estado y del mercado, así como en las distintas formas de visibilización que esta adquiere en el sistema, manifestando que:

the institutional of "civil society" is constituted by voluntary unions outside the realm of the state and the economy and ranging (to give some examples in no particular order) from churches, cultural associations, and academies to independent media, sport and leisure clubs, debating societies, groups of concerned citizens, and grass-roots petitioning drives all the way to occupational associations, political parties, labor unions, and "alternative institutions" (Habermas, 1996: 453).



El punto fundamental en esta concepción de la sociedad civil, más allá de adoptar el esquema no económico y no estatal, tiene una base voluntaria que se crea en el espacio público y forma parte del mundo de vida planteado por Habermas en su teoría comunicativa, lo que constituye la voz y la acción del sujeto que desea ser constructor del sistema. Las organizaciones, asociaciones y movimientos que constituyen la sociedad civil transportan al espacio público las problemáticas surgidas en los espacios privados (Habermas, 2001).

La sociedad civil no es un actor colectivo en sí misma, tampoco es un espacio unificado. Las unidades colectivas que se la conforman son diversas, su estudio ha resultado en una multiplicidad de clasificaciones y diferenciaciones derivado de la ambigüedad del concepto y los intereses fraccionados de las organizaciones. Mary Kaldor (2009:44) ofrece una visión estructurada de las diferentes expresiones asociativas que se desarrollan en el espacio de la sociedad civil delimitando sus versiones militante, neoliberal y posmoderna. La versión militante se centra en el estudio de los “nuevos movimientos sociales”, que buscan influir sobre el Estado e intervenir, o liderar, los cambios sociales, al retomar aspectos como los derechos humanos, el cambio climático, la gobernabilidad mundial y la justicia social. Por otro lado, la versión neoliberal tiene sus raíces en los sociólogos de Estados Unidos de América, con una visión occidental y la introducción del concepto “tercer sector” como sinónimo del concepto de sociedad civil, cuyo objetivo es atender las áreas de oportunidad ignoradas por el Estado con respecto al bienestar social de la población, incluyendo la defensa ante el poder político y económico. Por último, la versión posmoderna representa una combinación conceptual de las dos anteriores.

En México, las organizaciones civiles componen un elemento limitado de la sociedad civil perteneciente al sector asociativo desde un enfoque neoliberal, aunque este espacio ha intentado ser abarcado conceptualmente por las organizaciones no gubernamentales (ongs), definidas genéricamente como “toda organización sin ánimo de lucro que no sea gubernamental ni intergubernamental” (Fao, 2018). En nuestro país las ong son reconocidas oficialmente dentro del concepto de organizaciones de la sociedad civil formalmente constituidas. No obstante, es esencial consentir que la parte visible de la sociedad civil está constituida por conjuntos y redes de asociaciones civiles de diversa índole, objetivos, formales e informales, pero con características comunes que las hacen parte del tercer sector (Olvera, 2015; Canto, 2015).



El Instituto Nacional de Desarrollo Social define a las organizaciones de la sociedad civil como “agrupaciones constituidas por individuos, fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios” (Indesol, 2018). Sin embargo, este concepto se limita solamente a grupos constituidos oficialmente según la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y no confiere el reconocimiento o considera sujetos de apoyo a agrupaciones informales.

A nivel internacional la interpretación del término incluye a “los ciudadanos y los movimientos sociales (que) se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de personas, o temas de interés” (Fao, 2018), es decir, agrupaciones que se han constituido tanto formal como informalmente. Siendo México un país marcado por la movilización del pueblo, donde las acciones colectivas se definen por su carácter “local y puntual” (Svampa, 2009:2), la autoorganización social no puede limitarse a esquemas definidos formalmente, ya que estos no logran representar la amplitud de asociacionismo civil, ante esto resulta trascendental considerar también las versiones militantes y posmodernas planteadas por Kaldor (2009).

El estudio empírico de los nuevos movimientos sociales llevó a Alain Touraine a presentar las bases de una teoría alternativa y crítica, la teoría accionalista. Las relaciones y la vinculación de distintas acciones colectivas o eventos de protestas dan pie a definir los movimientos sociales como “la acción conflictiva por la cual las orientaciones culturales, un campo de historicidad son transformadas en formas de organización social que, a la vez, son definidas por normas culturales y por relaciones de dominación social” (Touraine, 1986a:110). Estos cambios son liderados por actores sociales que poseen un adversario identificado, produciendo identidad propia y prácticas sociales alternativas.

Los movimientos sociales no son considerados organizaciones sino procesos dirigidos hacia un objetivo específico, un adversario identificado y vinculado a través de una identidad colectiva, esto no limita que los movimientos sociales solamente se integren de individuos, ya que también pueden dar lugar a la participación de organizaciones o colectividades específicas. La participación de distintos tipos de miembros en la construcción y desarrollo de un movimiento social ha sido estudiada a través de las redes haciendo énfasis en el análisis de “las dinámicas subyacentes a las poblaciones



organizativas” (Della Porta y Diani, 2011:37). Las organizaciones como miembros del movimiento social representan coaliciones derivadas de un adversario en común, aunque no involucren necesariamente el desarrollo de una misma identidad y mantengan una diferencia analítica de las mismas respecto al movimiento social.

La construcción de una “categoría de hechos denominados movimientos sociales” solamente es posible al enmarcarse en un modelo, situación o sistema de análisis de la sociedad (Touraine, 1986a:103). En este enfoque, los movimientos sociales se visibilizan únicamente por la acción colectiva que presenta tres elementos básicos: a) la solidaridad como dispositivo de unión, b) el conflicto y c) un sistema de actores, representados por miembros y adversarios (Ramírez Sáiz, 1991).

Los conflictos solo pueden existir cuando se integran tres elementos: un espacio o ambiente donde se puedan desarrollar los actores, una oposición con un adversario claramente identificado, y por último, una identidad propia y definida por cada bando (Wieviorka, 2010). Los conflictos sociales modernos poseen dimensiones culturales que llevan a los actores inmersos en el mismo a defender valores distintos, así como a utilizar formas de movilización innovadoras y perseguir objetivos diferentes a los conflictos de la sociedad industrial, aunque pueden compartir las desigualdades de poder y *status* de los conflictos de clase. El principal elemento que los distingue es que generar un colectivo no limita el desarrollo del individualismo, ya que los nuevos conflictos sociales buscan construir relaciones entre la esfera personal y pública donde se desarrolla el individuo (Della Porta y Diani, 2011; Wieviorka, 2010).

Los conflictos relacionados con el medio ambiente incluyen diversidad de variables, por lo que Sabatini (1997a: 26) los considera disputas superiores a los del tipo social y político, ya que "es difícil cuantificarlos, identificar sus fuentes o responsables, precisar quiénes se benefician y quiénes se perjudican con ellos, así como individualizar sus causas", entre otras peculiaridades. El conflicto socioambiental es definido como un “subgrupo dentro de los conflictos sociales e implican una contraposición o incompatibilidad de posturas, específicamente con relación al acceso, uso y significado de los recursos naturales y a diferentes perspectivas sobre la degradación ambiental” (Pallanez, 2015). El problema ambiental se convierte en conflicto cuando los diferentes actores sociales expresan distintos intereses. Para entender el conflicto desde la perspectiva de los actores sociales, Sabatini (1997a) presenta un modelo de tres actores básicos en este tipo de conflictos: empresas (extractoras y contaminadoras), comunidad (organizaciones de la sociedad civil) y Estado; la relación entre los mismos se determina



en su capacidad de negociación, fundamentada en la distribución del poder y del capital, lo que deja en la mayoría de los casos a las comunidades y sus organizaciones en desventaja.

La metodología de la acción colectiva

Para el desarrollo de la investigación se pretende desplegar un modelo metodológico de carácter cualitativo, basado en el método de intervención sociológica desarrollado por el sociólogo Alain Touraine. La intervención sociológica es una metodología de trabajo por grupos para el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales, se centra en la interpretación de las formas de organización social derivadas de conflictos sociales; va mucho más allá de las entrevistas en grupo y del análisis del discurso, ya que se busca crear una relación cercana entre el grupo de investigación y la acción colectiva estudiada. El proceso de intervención sociológica consta de dos momentos: el autoanálisis y la conversión. Estos momentos deben encontrarse separados por una interrupción prolongada que permita una reflexión tanto para los participantes como para el investigador.

El autoanálisis implica descomponer el sentido de la acción en sus aspectos culturales y sociales (Touraine, 1986b). La conversión es definida por Touraine (1986b: 9) como un espacio para “reinterpretar su historia como grupo”. En esta etapa, el investigador presenta la acción colectiva por medio de hipótesis y se busca que los actores reaccionen ante esa representación de sí mismos y de su acción.

En un primer acercamiento la metodología podría considerarse simple, y derivado de ello poco flexible, sin embargo, la experiencia de Velasco (2011) muestra una gran capacidad de adaptación en un contexto nacional. La investigadora ajustó el método de intervención sociológica al añadir una etapa preliminar con el objetivo de demarcar el campo de la acción colectiva y los actores; posteriormente se definieron las etapas clásicas.

Resultados preliminares y hallazgos

El objetivo de la fase de análisis preliminar fue identificar actores y organizaciones que integran el conflicto socioambiental del Río Sonora, así como los espacios de confrontación expresados en términos materiales y simbólicos. Además, de definir los criterios de selección para integrar el grupo de trabajo para la fase de autoanálisis. Se utilizaron fuentes secundarias de información para delimitar la actuación de los actores desde el nacimiento del conflicto hasta el presente (Tabla 1).



Organización	Origen	Nivel Organización	Enfoque	Marco estratégico	Perfil
SNTMMSRM	No local	Formal	Laboral	Político	Organización acompañante
Sección 65	No local	Formal	Derechos Humanos	Apolítico	Organización acompañante
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)	No local	Formal	Ambiental	Apolítico	Divulgación
Red Fronteriza de Salud y Ambiente A.C (RFSAAC)	No local	Formal	Legal	Apolítico	Asesor legal
Acciones colectivas de Sinaloa, A.C. (ACSAC)	No local	Formal	Legal	Apolítico	Asesor legal
Frente Unido Río Sonora (FURS)	Local	Informal	Político	Político	Organización acompañada
Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS)	Local	Informal	Derechos Humanos	Apolítico	Organización acompañada
Frente Río Sonora, Ures A.C. (FRSUAC)	Local	Formal	Político	Político	Organización acompañada

Tabla 1. Clasificación de las OSC involucradas en el conflicto socioambiental

Fuente: Elaboración propia basado en bibliografía.

Aunado a lo anterior, se aplicó la técnica de Análisis de Redes Sociales (ars) para determinar cuáles organizaciones de la sociedad civil continuaban activas a cuatro años del derrame. Se utilizó el método de bola de nieve para contactar a los actores. Para el ARS se utilizó el programa Ucinet 6 (Borgatti, Everet y Freeman, 2002). Se construyeron un total de 4 grafos, que hacen referencia a las relaciones formales de colaboración entre los actores en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

El análisis de redes sociales longitudinal permitió observar la evolución hasta 2017 de las relaciones formales de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el conflicto socioambiental derivado del derrame de agosto del 2014. En términos de la densidad de la red, se observa que en ninguno de los periodos se logró alcanzar su máximo potencial de 90 posibles relaciones dirigidas, sin embargo, es interesante notar que se tuvo un incremento en el número de relaciones en los tres primeros años del conflicto, hasta lograr un pico de 22 relaciones en el 2016, aunque posteriormente se presenta una tendencia a la disminución.

La centralidad de los actores en la red es determinante ya que proyecta la capacidad de estos de generar relaciones, en los primeros años del conflicto este papel corresponde a organizaciones de la sociedad civil externas al territorio. En contraposición a lo anterior, en el año 2017 la centralidad en la red es representada por grupos formados por pobladores del Río Sonora. El análisis también arrojó que en términos de intermediación o capacidad para conectar pares de actores, las organizaciones de la sociedad civil no locales poseen un papel preponderante.



El resultado de la fase preliminar fue identificar los perfiles de los actores aliados y adversarios, los espacios de confrontación para integrar el grupo de estudio para analizar el conflicto socioambiental del Río Sonora (Tabla 2 y Tabla 3).

Actores / Aliados	Espacio de confrontación
OSC informal-local	Político, Derechos humanos-ambientales
OSC formal-local	Político
OSC formal-no local	Derechos humanos-ambientales
Sindicato minero	Político, Laboral

*Tabla 2. Aliados, adversarios y espacios de confrontación
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Fase Preliminar.*

Adversarios	Espacio de confrontación
Funcionarios del gobierno	Institucional
Sector minero	Político

*Tabla 3. Adversarios del conflicto socioambiental
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Fase Preliminar.*

La lucha por la remediación del río Sonora está viva, las organizaciones de la sociedad civil formales e informales continúan, mediante estrategias diferenciadas, buscando la restitución de los daños, que les aseguren la no repetición del desastre ambiental y señalando como adversarios al Estado y al sector minero.

Bibliografía

- Acosta, A. (2012). Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. En Más allá del desarrollo, coordinado por M. Lang, y D. Mokrani, 83-121. Quito: Abya Yala Ediciones.
- Arato, A. (1996). Emergencia, declive y reconstrucción del concepto de sociedad civil. Pautas para análisis futuros. *Isegoria* (13): 5-17
- Borgatti, S.; Everett, M. y Freeman, L. (2002). Ucinet 6 para Windows: Software para Análisis de Redes Sociales. Harvard: Analytic Technologies.
- Camimex. (2014). Mapa de indicadores mineros. Recuperado de: <<https://bit.ly/3oi20n7>>. (13 de Octubre de 2016)
- Canto Chac, M. (2015). La disputa teórica sobre las organizaciones civiles. Un asunto político ideológico. En las organizaciones civiles mexicanas hoy, coordinado por Cadena, J. 49-71. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- ccrs Comités de cuenca del Río Sonora. (2016). Recuperado de: <<https://bit.ly/38f8Rs6>>. (13 de Octubre de 2016)



ccrs Comités de Cuenca del Río Sonora. (2017). Recuperado de: <<https://bit.ly/3ommfA4>>.

Cofepris.(2015). Balance de las acciones del gobierno de la república en el Río Sonora. Recuperado de <http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/documentos.html>

Cohen, J. y Arato, A. (2000). El Resurgimiento contemporáneo de la sociedad civil. En Ídem. Sociedad civil y teoría política. México: Fondo de Cultura Económica.

Della Porta, D. y Diani, M. (2011). Los movimientos sociales. Centro de Investigaciones sociológicas. España: UCM Editorial Complutense.

Enciso, A.(27 de agosto de 2014). “Descuido” de la empresa, causa del derrame en Sonora: Semarnat. La Jornada. Recuperado de: <<https://bit.ly/3s7GG6m>>.

Escobar, A. (24 de agosto 2014a). Realizan mineros bloqueos a vías del ferrocarril en Sonora. El Universal. Recuperado de: <<https://bit.ly/3bcBBn9>>.

Escobar, A. (3 de septiembre de 2014b). Presentan demanda colectiva contra Grupo México. EL Universal. Recuperado de: <<https://bit.ly/38hVE1v>>

Escobar, A. (4 de noviembre de 2014c). Bloquean carreta afectados por el derrame de minera. El Universal. Recuperado de: <<https://bit.ly/3rYSTdu>>

Escobar, A. (1 de noviembre de 2014d). Yaquis refuerzan movimiento contra minera en Sonora. Recuperado de <http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/yaquis-sonora-derrame-1032959.html>

Escobar, A.; Arvizu Arrijoja, J. y Nieto, F. (21 de agosto de 2014). Piden cancelar concesión a Grupo México. El Universal. Recuperado de: <<https://bit.ly/3pRw9Kr>>.

fao. (2018). ¿Qué entendemos por ong/osc? Recuperado de: <<https://bit.ly/38hyCrO>>.

Gobierno del Estado de Sonora. (2018). Sonora en la minería. Recuperado de <http://economiasonora.gob.mx/portal/minero>

Grupo México. 2018. Acerca de Grupo México. División Minera. Recuperado de <http://www.gmexico.com/site/nosotros/mineria.html>

Gudynas, E. (2011). Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al postextractivismo. En Más allá del desarrollo, compilado por M. Lang, y D. Mokrani, 265-298. Quito: AbyaYala.

Guerrero, P. (1999). Aproximaciones conceptuales y metodológica al conflicto social. En Comunidades y conflictos socioambientales: experiencias y desafíos en América Latina compilado por Ortiz, P. Quito: Ediciones Abya-Yala

Habermas, J. 1996. Further reflections on the public sphere. En Calhoun, C. (Ed.) En Habermas and the public sphere. Londres: MIT Press.

Habermas, J. 2001. Factibilidad y Validez. Madrid: Trotta



- Indesol. 2018. ¿Qué es una OSC? Recuperado de <https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/registro-federal-de-las-osc>
- Kaldor, M. (2009). La idea de una sociedad civil global. En *Los movimientos sociales: De lo local a lo global* coordinado por Mestries, F.; Pleyers, G. y Zermeño, S. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Lammers, G. 2014. Río Sonora. La historia detrás del derrame. *Crónica ambiental*. Recuperado de <https://agua.org.mx/biblioteca/rio-sonora-la-historia-detras-del-derrame/>
- Lara, B. y Rodríguez, L. (2015). Neoextractivismo y minería en Sonora, México. *Problemas y riesgos para el desarrollo local*. Uruguay: Tercer Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo.
- Ocmal. (2018). Mapa de conflictos mineros. Recuperado de: <<https://bit.ly/3nIDjVA>>.
- Olvera, A. (2001). Los modos de recuperación contemporánea de la idea de sociedad civil. En *La sociedad civil. De la teoría a la realidad*, en ídem, 27- 81. México: El Colegio de México.
- Olvera, A. (2015). Representaciones e ideologías de los organismos civiles en México: crítica de la selectividad y rescate del sentido de la idea de sociedad civil. En *las organizaciones civiles mexicanas hoy*, coordinado por Cadena, J. 23-47. México: Universidad Nacional Autónoma de México
- Pallanez, M. (2015). Conflictos socioambientales en Áreas Naturales Protegidas: Caso "Mavavi"(1997-2003). (Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales) El Colegio de Sonora, México
- Ramírez Sáinz, J. (1991). El movimiento urbano popular (MUP): teoría y método. En *El estudio de los movimientos sociales: Teoría y método* coordinado por Muro, V. y Canto Chac, M. México: El Colegio de Michoacán.
- Sabatini, F. (1997a). Espiral histórica de conflictos ambientales. En *Conflictos ambientales. Entre la globalización y la sociedad civil* editado por Sabatini, F. y Sepulveda, C. Chile: Publicaciones CIMPA.
- Semarnat. 2014. Derrame de sulfato de cobre en el Río Bacanuchi (Afluente del Río Sonora) Recuperado de <http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/documentos.html>
- Svampa, M. (2009). Protesta, movimientos sociales y dimensiones de la acción colectiva en América Latina. España: Jornadas de Homenaje a Charles Tilly
- Touraine, A. (1986b). Introducción al método de intervención sociológica. *Estudios sociológicos* 4(11): 197-213.



Touraine, A. (1986a). Capítulo VI. Los movimientos sociales. En Touraine y Habermas. Ensayos de Teoría Social coordinado por Galván Díaz, F. México: Universidad Autónoma de Puebla.

Vega-Deloya, H. (2017). El papel de las ONG's en la construcción social del derecho ambiental por medio del trabajo de organización comunitaria y la promoción de derechos humanos. En Simposio Internacional Interdisciplinar de Investigación sobre Violaciones a Derechos Ambientales. México: Universidad de Sonora

Velasco, L. (2011). Identidad regional y actores: una experiencia de intervención sociológica en el valle de San Quintín, Baja California. *Región y sociedad* 51 (XXIII): 43-67.

Wieviorka, M. (2010). El conflicto social. *Sociopedia*. Isa. Recuperado de: <<https://bit.ly/3okwJjo>>.



Oposición y negociación en conflictos generados por megaminería en México.

Ulises Pavel Martínez Romero¹

Resumen

El nuevo escenario de extracción de minerales ha ocasionado una gran cantidad de conflictos socioambientales y México es uno de los países más afectados en América Latina. En estas disputas generalmente hay tres actores principales involucrados: la empresa, la comunidad y las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. A partir del análisis de algunos de los conflictos megamineros más importantes en México pude detectar dos consignas o peticiones preponderantes en ellos: una que alude a la oposición del proyecto minero, y otra que refiere a mejores condiciones en la relación entre la empresa y la comunidad. Con el uso de tablas de contingencia encontré que hay una fuerte asociación entre las demandas en el conflicto y la estructura económica y social de la comunidad. Las preguntas entonces fueron: ¿Por qué en algunos conflictos hay oposición y en otros no a los proyectos megamineros? y ¿Cómo se construyen los conflictos, tanto de oposición como de negociación, generados por megaminería en México?

Con el objetivo de dar respuesta a estas interrogantes, analicé cuatro casos de conflictos megamineros, dos en un lugar con vocación minera y dos con vocación campesina. Entre los primeros se encuentran Mineral de la Luz, Gto. y Cerro de San Pedro, S.L.P., y entre los segundos están Zautla, Puebla y San José del Progreso, Oaxaca. Encontré que las comunidades cercanas a proyectos megamineros tienen diferentes estadios de conflicto dependiendo, sobre todo, de la vocación económica del lugar donde se instala el proyecto, el modus operandi de la empresa minera, la relación de la comunidad con las autoridades, la presencia de grupos aliados que provean de información y la etapa del proyecto minero en relación con su intensidad y la irrupción en la vida cotidiana de los pobladores.

Palabras clave

Extractivismo; Vocación económica; Dispositivo expropiatorio,

Introducción

Uno de los problemas sociales más importante con el que se enfrenta México es el creciente número de conflictos generados por actividades extractivas. A mediados de la



década de los 90, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), se hicieron múltiples reformas a leyes mexicanas para permitir la entrada y operación de empresas de origen extranjero en diferentes sectores económicos. Desde entonces se han desarrollado numerosos proyectos que necesitan de grandes cantidades de recursos como agua, energía y espacio. Dentro de estos se encuentra el sector minero como uno de los más favorecidos. Empresas mexicanas y de origen extranjero (particularmente canadienses) iniciaron labores de exploración en busca de oro, plata, carbón, acero y otros minerales concesionables. A la par, también surgieron conflictos sociales en torno a las actividades de exploración, instalación y explotación que realizan las empresas mineras.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), hasta 2018 se registraron, en 20 países de la región, un total de 252 conflictos relacionados con esta industria extractiva. México tiene el mayor número de conflictos con un total de 45. Pero otros conteos tienen cifras muy distantes para el caso mexicano. Por ejemplo, Sol Jiménez (2014) identifica 103 conflictos, J. Jesús Lemus (2018) encuentra más de 1,400 conflictos al cierre de 2017 y según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) hay más de 15,000 conflictos en el país.

Los conflictos generados por megaminería en México tienen diferentes características. Primero, se distribuyen en casi todo el territorio mexicano, de norte a sur y de este a oeste; tanto en lugares donde la jerga minera sigue siendo parte de la vida cotidiana, como en aquellos donde nunca se habían pronunciado o escuchado palabras como *malacate*, *barrenos* y *tiros*. No obstante, en todos los conflictos hay por lo menos tres actores en constante interacción: la comunidad que hace los reclamos, la empresa que quiere llevar a cabo su proyecto extractivo y las autoridades en los diferentes órdenes de gobierno encargadas de dar permisos y autorizaciones a las mineras.

Asimismo, las demandas de los grupos involucrados en estos conflictos son también muy diferentes. Si revisamos el estado actual de los conflictos megamineros en México, podemos distinguir, por lo menos, dos tipos de conflictos: *conflictos de oposición* y *conflictos de negociación*. Las diferencias entre unos y otros es que en los primeros hay partes antagónicas en una relación directa de oposición respecto a algo que no es compatible y sobre lo que se tienen intereses contrapuestos, diferencias esenciales y/o proyectos incompatibles; y en los segundos existe una relación de cooperación o negociación sobre algo que es compatible y sobre los que se tienen intereses compartidos y sobre los que no hay diferencias esenciales y/o proyectos incompatibles.



Es decir, hay conflictos en los que las batallas que se libran son de suma cero (por ejemplo, que se vaya la empresa y su proyecto de la comunidad), y otros en los que hay margen para llegar a acuerdos de distintos tipos (por ejemplo que el proyecto se instale y opere, pero que pague bien la renta de tierras y que ofrezca y garantice fuentes de empleo bien remunerado).

Estas diferencias nos llevan a preguntarnos por los factores que inciden en estas diferencias entre los conflictos, es decir, ¿por qué en algunos conflictos hay oposición y en otros no a los proyectos megamineros?

Desarrollo

Con fines exploratorios, construí una base de datos sobre conflictos megamineros en México. Si bien hay varios trabajos que buscan hacer un recuento de dichos conflictos, yo me centré en ciertos aspectos que hacen que considere algunos casos y otros no. Sobre esto ahondaré más adelante. En mi base de datos la relación entre estados de la república y número de conflictos es la siguiente:

Estado	Número de Conflictos
Baja California	2
Baja California Sur	2
Chiapas	5
Chihuahua	6
Coahuila	2
Colima	3
Durango	4
Guanajuato	1
Guerrero	3
Hidalgo	1
Jalisco	1
México	1
Michoacán	1
Morelos	1
Oaxaca	8
Puebla	5
Querétaro	1
San Luis Potosí	2
Sonora	3
Veracruz	2



Zacatecas	3
Total general	57

Tabla 1. Número de conflictos mineros por estado de la República
Fuente: Elaboración propia

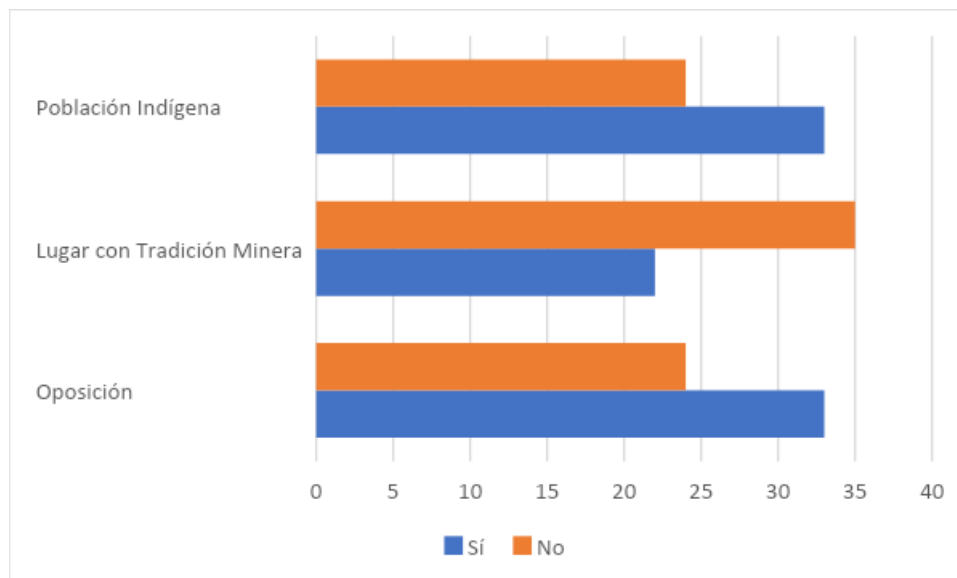
Al igual que Sol Jiménez (2014), encuentro estos 57 conflictos en 22 estados de la República mexicana y, por otro lado, los estados de Aguascalientes, Tabasco, Yucatán, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Campeche, Tlaxcala y la Ciudad de México no presentan conflictos. En el estado de Oaxaca es donde registré más conflictos mineros, seguido de Chihuahua y en tercer lugar Puebla y Chiapas.

Uno de los aspectos más importantes que hicieron que registrara menos conflictos que Sol Pérez Jiménez (2014), y que haya conflictos que registra OCMAL que yo no, fue que los conflictos laborales no fueron incluidos en mi listado. Aun así, hubo algunos conflictos registrados por Sol Jiménez de los que no encontré información y decidí no agregarlos; asimismo, tanto OCMAL como Sol Jiménez no tienen registro de muchos conflictos de los que yo sí, esto se puede deber al momento en que se hizo la búsqueda.

La base de datos la construí a partir de información secundaria; notas periodísticas, triangulación de información con otras bases de datos y la difusión de información por parte de redes de solidaridad con movimientos contra megaminería.

En el Anexo 1 está el resumen de la base de datos que construí. Podemos ver 10 variables, de las cuales quiero destacar cuatro: *Oposición*, *Lugar con vocación minera*, *Población indígena* y *Sector de Movimientos Sociales (SMS)*.

Así, tenemos que en 33 de estos conflictos hay *oposición* al proyecto, mientras que el resto (24) son conflictos de *negociación*. De estos 57 conflictos, 21 de ellos se desarrollan en un lugar con vocación minera y 36 en otro tipo de lugar. Y, por último, en 33 conflictos hay población indígena, mientras que en los 24 restantes no la hay. Esta información está condensada en la siguiente gráfica:



Gráfica 1. Número de conflictos por variables de interés
Fuente: Elaboración propia

Esta primera gráfica nos dice que la mayor parte de los conflictos mineros en México son de *oposición*, con *población indígena* y en lugares sin *vocación minera*. La mayor disparidad está en los conflictos en lugares con vocación minera, pues éstos son pocos en comparación con los conflictos ubicados en lugar sin vocación minera, al igual que con aquellos conflictos de oposición o población indígena. Sin embargo, esta información nos da sólo un panorama general de las cuatro variables. Por tanto, se vuelve trascendental empezar un análisis de cada una de ellas.

Oposición y Negociación a proyectos megamineros - ¿David contra Goliat?

En principio estoy interesado en dar cuenta sobre la oposición y negociación a megaproyectos mineros. Si tuviéramos que ver esta relación en términos de variables, esta oposición o negociación sería la variable a explicar o, dicho de otro modo, la variable dependiente.

Es común creer que los conflictos megamineros tienen como punto en común la lucha, de parte de la pequeña comunidad, contra la gran empresa minera que cuenta con grandes cantidades de recursos (políticos y económicos). Una de las analogías más utilizadas en este sentido es la conocida lucha de “David contra Goliat”. En ese pasaje bíblico se referencia a Goliat como un gigante que asedió durante varios días al ejército de Israel; este gigante fue derrotado por David, quien, con una honda y una piedra, lo hirió y posteriormente muere decapitado por su propia espada. La idea de que las empresas mineras cuentan con recursos casi ilimitados no es descabellada, pues



realmente cuentan con importantes capitales políticos y económicos; pero la idea de que las comunidades inmersas en este tipo de conflictos siempre están luchando contra estas empresas no siempre es así.

En este sentido, Darcy Tetreault (2014; 2014a) reconoce que no todos los conflictos representan oposición o un “giro <<eco-territorial>>”. A su vez, Pérez Jiménez dice que hay que distinguir las “posturas de principio” de los conflictos, las cuales pueden ser tres: “no rotundo”, no acepta transacción de dinero por territorio; “transacción justa”, que busca un pago justo por sus tierras; y “lenguaje subalterno”, en el cual los pobladores se ven obligados por los poderes fácticos a aceptar el pago por sus tierras (Jiménez, 2014:112-113). Uno de los puntos más importantes al hacer esta distinción es que el abanico de demandas de los conflictos es más amplio que sólo el de los movimientos de oposición, pues incluye la negociación con la empresa.

Es importante señalar que hasta este momento he referido a conflictos y no a movimientos contra megaminería. Sería un error pensar que son lo mismo o que ambos se suponen a sí mismos. Si bien es cierto que los movimientos sociales suponen la existencia de algún tipo de conflicto, los conflictos no siempre suponen la presencia de movimientos sociales.

De esta manera, distingo por lo menos dos tipos de intereses en los conflictos mineros en México. Por un lado, los *conflictos de negociación* se refieren a aquellos conflictos en los cuales se pone en juego la negociación de cierto sector de la población con la empresa; es decir, aquí no existe oposición al proyecto, sino el interés por llegar a un mejor acuerdo en ese contexto. El arriendo de tierras o la cantidad de dinero destinado al fondo minero son algunos ejemplos de este tipo de conflictos. Se caracteriza, pues, por el intercambio de bienes y servicios.

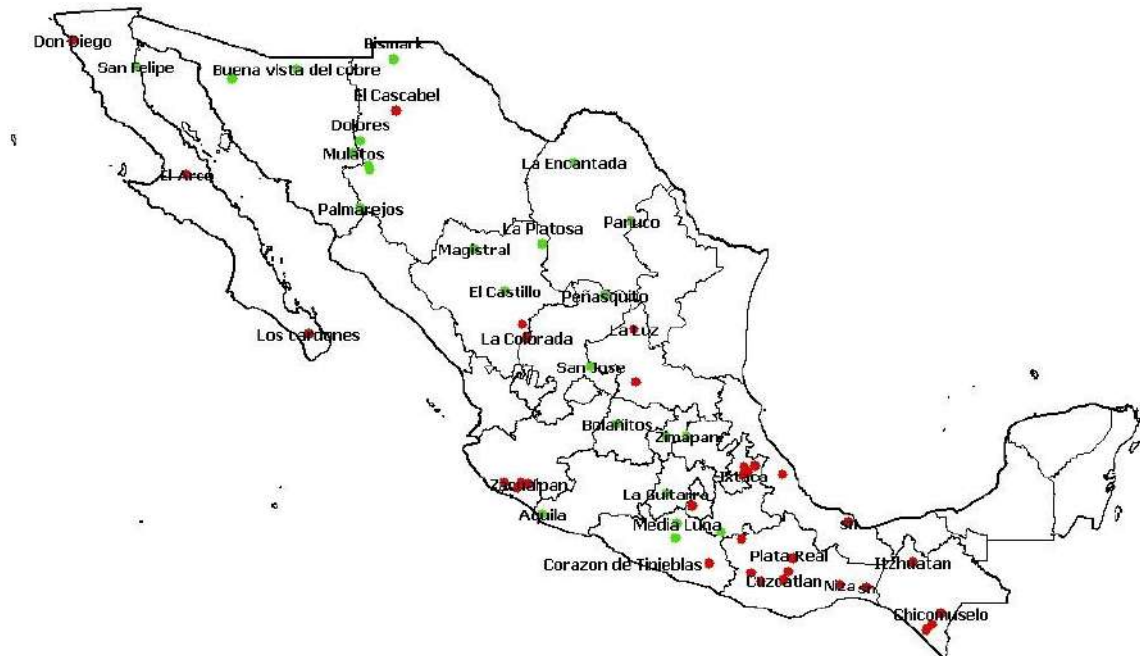
No siempre es fácil reconocer estos conflictos porque en ocasiones son enmarcados con discursos ambientales y de salud, en lugar de justos acuerdos. Asimismo, en los conflictos también pasa que hay una parte que está a favor con acuerdos justos y otros que están totalmente en contra de la empresa, entonces se vuelve jabonoso ver los conflictos como unidad.

Por otro lado, los *conflictos de oposición* son aquellos en los cuales existe un sector de la sociedad que expresa oposición al proyecto. Esta oposición es indiscutible y su interés es que el proyecto no se lleve a cabo. Esto no implica unidad de la sociedad y autoridades en la oposición; incluso muchas veces sucede que las comunidades están



fraccionadas entre los que están a favor y en contra del proyecto minero, así como también sucede que las autoridades estén a favor.

Para la construcción de la base de datos, el tipo de conflicto se asignó al caso con base en la búsqueda en periódicos nacionales y locales en internet. En el momento en que un sector de la población/comunidad expresara oposición al proyecto, codifiqué el caso como de oposición; cuando no encontré indicios de esta oposición, codifiqué como negociación. La distribución geográfica de los conflictos está en el Mapa 3, en el cual, además, distingo con color verde los conflictos de *Negociación* y con rojo los de *Oposición*.



Mapa 3. Conflictos mineros de oposición y negociación
Fuente: Elaboración propia con ayuda de Mapa Digital INEGI

Una de las primeras cosas que podemos notar en este mapa es que hay estados que no tienen ningún punto pues, como ya dije, son los que no presentan ningún tipo de conflicto minero. Pero también podemos ver una clara tendencia a ver más puntos rojos al sur y, por el contrario, verdes al norte.

Este primer resultado me llevó a preguntarme si el tipo de conflicto estaba relacionado con la historia de minería. Fueron sobre todo los conflictos de negociación los que me dieron los indicios sobre la posible relación entre las demandas de las comunidades y la posible vocación minera del lugar.



Los registros que hice en mi base datos fueron con base en la historia del lugar donde se lleva a cabo el proyecto minero. Una vez que identifiqué los proyectos mineros en conflicto, busqué sobre la historia del lugar donde éstos se desarrollaban y si allí hubo actividad minera dese antes de la década de los 90. Entonces registré el lugar con vocación minera.

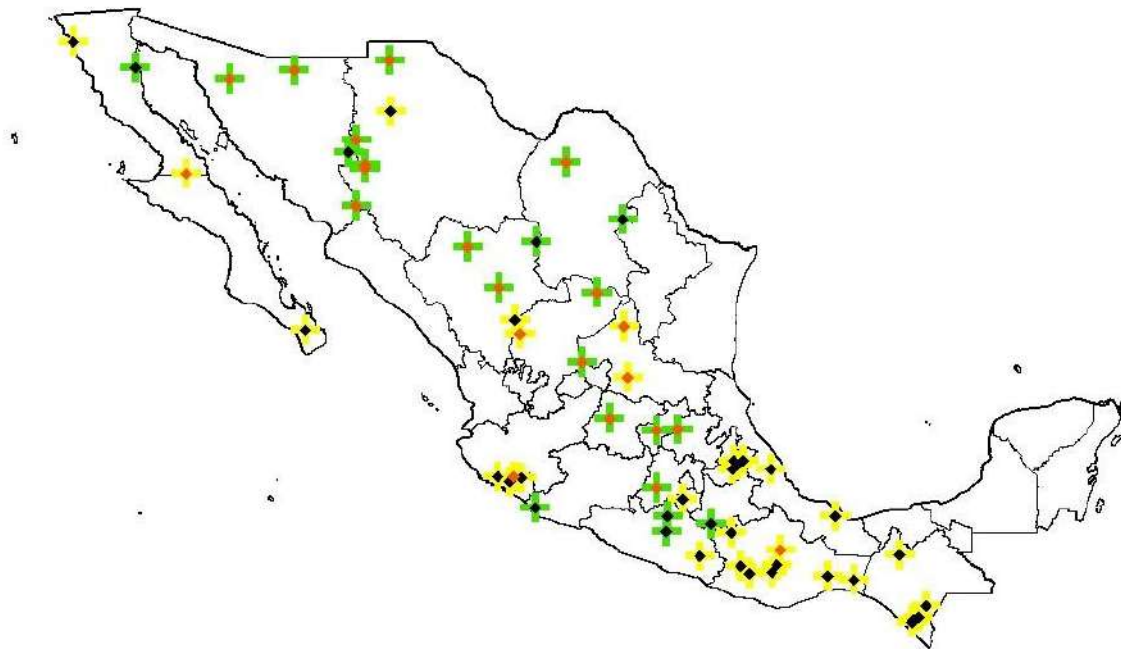
			Vocación Minera		Total
			No	Sí	
Oposición	No	Recuento	8	16	24
		% dentro de Vocación	22,9%	72,7%	42,1%
	Sí	Recuento	27	6	33
		% dentro de Vocación	77,1%	27,3%	57,9%
Total		Recuento	35	22	57
		% dentro de Vocación	100,0%	100,0%	100,0%

Tabla 2. Tabla cruzada Oposición/Vocación Minera

Fuente: Elaboración propia con ayuda de SPSS

En la *Tabla 2* crucé los conflictos de oposición con aquellos en lugares con vocación minera. Esta tabla nos dice que 24 casos –es decir, 42.1%– son de *Negociación*, lo cual indica que hay más casos de *Oposición*, con un 57.9% del total de los casos. Dentro de los conflictos de *Vocación Minera*, el 72.7% de ellos no se oponen al proyecto minero, frente al 27.3% de ellos sí lo hacen; es decir, no buscan negociación, sino que se vaya el proyecto. Este dato contrasta con los conflictos en lugares de *No Vocación Minera*, en los cuales los porcentajes se contraponen, pues donde no hay vocación minera el 77.1% de los casos se opone rotundamente al proyecto minero, mientras que el 22.9% no lo hace.

La distribución de los conflictos con estas dos características la podemos ver en el siguiente mapa.



Mapa 1. Conflictos mineros y vocación minera
Fuente: Elaboración propia con ayuda de Mapa Digital INEGI

Las cruces indican los conflictos megamineros; de éstas, las verdes indican conflictos de *Negociación* y las amarillas los de *Oposición*. Por otro lado, los rombos naranja indican lugares con vocación minera y los negros lugares sin vocación minera. Llamamos la atención a los cinco casos que son de *Oposición* en lugares con vocación minera, es decir, aquellos conflictos donde la cruz es amarilla y el rombo naranja: los dos casos de San Luis Potosí (Cerro de San Pedro y Real de Catorce), el de la frontera entre Baja California y Baja California Sur (Proyecto El Arco), La Colorada en Zacatecas, Peña Colorada en Colima y La Natividad en Oaxaca.

Vocación campesina/Población indígena

Según el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Así, el *Censo de Población y Vivienda 2010* del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información (INEGI) registró que un poco más del 6% de la población en México habla una lengua indígena y sumando a esto aquellas personas que se autoconsideran indígenas llegan casi al 15% de la población. Las entidades federativas que



tienen la mayor concentración de población hablante y autoadscritos se encuentran al sur del país, siendo: Yucatán (62%), Oaxaca (58%), Quintana Roo (34%), Chiapas (33%), Campeche (32%).

Para hacer los registros en mi base de datos no me guíé con la información de INEGI, sino con lo que reportaban las noticias acerca del conflicto. No utilicé la información de INEGI porque los límites de las poblaciones indígenas pueden ser imprecisos o borrosos; preferí basarme en lo que informan los diarios sobre las partes involucradas. Cuando los medios mencionaron que alguna de las partes pertenecía a algún grupo indígena, entonces registré que había población indígena.

		Voc. Campesina -Población Indígena		Total	
		No	Sí		
Oposición	No	Recuento	16	8	24
		% dentro de VC-PI	64,0%	25,0%	42,1%
	Sí	Recuento	9	24	33
		% dentro de VC-PI	36,0%	75,0%	57,9%
Total	Recuento	25	32	57	
	% dentro de VC-PI	100,0%	100,0%	100,0%	

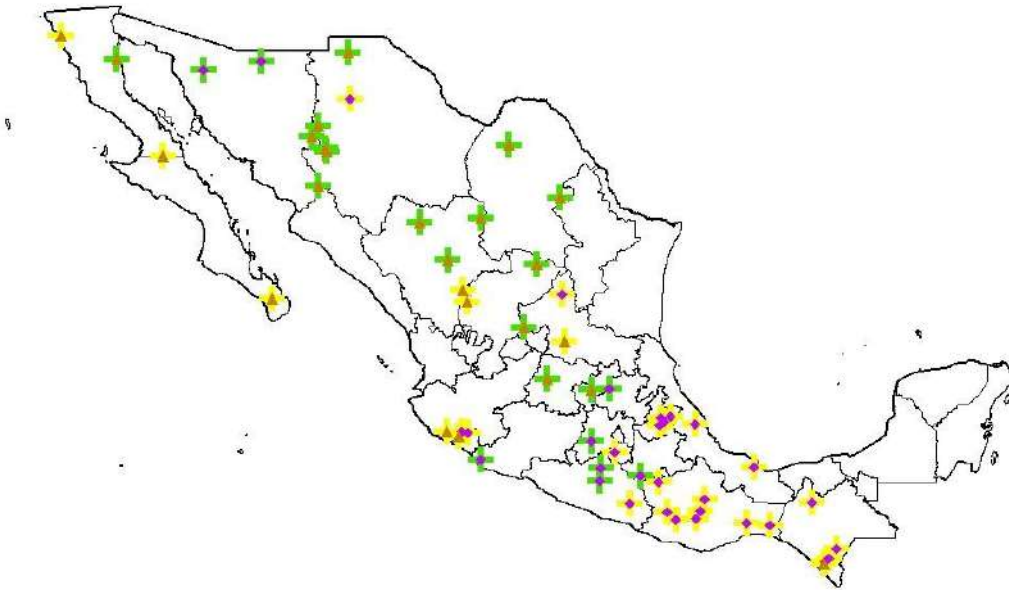
*Tabla 3. Tabla cruzada Oposición/Vocación Campesina-Población indígena
Fuente: Elaboración propia con ayuda de SPSS*

La *Tabla 3* –además de la cantidad de casos de Oposición y Negociación, que ya fueron descritos con la *Tabla 2*– nos dice que son 25 casos de conflictos en donde hay población indígena y de éstos en 16 (64%) tampoco hay oposición al proyecto. Contrario a esto, son 32 casos donde sí hay población indígena y 24 de ellos (75%) los que sí se oponen al proyecto, es decir, sólo una cuarta parte de los conflictos donde hay población indígena no se opone a los proyectos megamineros.

En el *Mapa 2* podemos ver el cruce entre estas dos variables. Al igual que en el *Mapa 1*, las cruces verdes indican conflictos de *Negociación* y las amarillas los de *Oposición*. En este caso los rombos color rosa indican los conflictos en donde hay población indígena involucrada y los triángulos café donde no. Rápidamente notamos que en el sur del país hay más conflictos donde hay población indígena, mientras que en el norte hay prácticamente sólo cuatro casos: Buena Vista y La Herradura en Sonora; El Cascabel en Chihuahua; y La Paz, en Real de Catorce, San Luis Potosí. De estos cuatro, dos son de oposición y los otros dos no. Por otro lado, en el sur los conflictos donde hay población indígena y Negociación son: Los Filos y Media Luna en Guerrero; La Guitarra en el Estado de México; Aquila en Michoacán; Zimapán en Hidalgo; y un proyecto sin

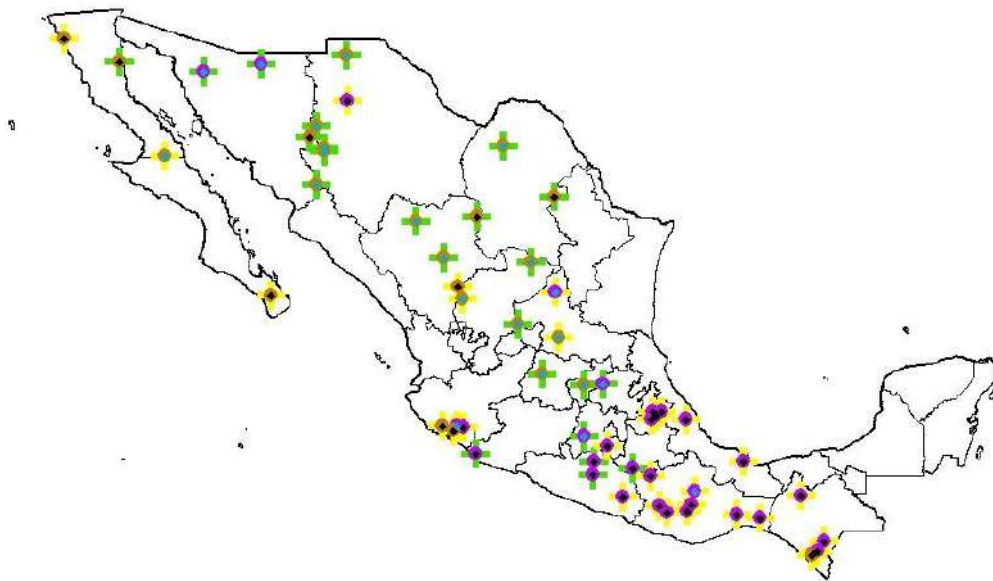


nombre en Puebla. Por último, según este mapa, otro caso que resulta atípico es el de La Cristina, en el estado de Chiapas.



*Mapa 2. Conflictos mineros y vocación campesina/población indígena
Fuente: Elaboración propia con ayuda de Mapa Digital INEGI*

Ahora, en el siguiente mapa tengo un cruce de las tres variables, que si bien puede resultar un poco difícil de leer, creo que nos da pista de varios casos atípicos. En éste, de nueva cuenta las cruces indican lo mismo que en el Mapa 1 y 2, lo mismo que los rombos, puntos y triángulos. Así, creo que hay dos tipos de proyectos que son de mucho interés según las hipótesis que planteé antes: por un lado aquellos en lo que hay oposición, sin población indígena y con vocación minera, como sería El Arco en Baja California, Cerro de San Pedro en San Luis Potosí y La Colorada en Zacatecas; y por otro lado, los conflictos de Negociación, con población indígena y sin vocación minera, como Los Filos y Media Luna en Guerrero, Aquila en Michoacán y un proyecto sin nombre en Tulcingo del Valle, Puebla.



Mapa 3. Conflictos mineros, vocación campesina/población indígena y vocación minera
Fuente: Elaboración propia con ayuda de Mapa Digital INEGI

Redes de Movimientos Sociales

A decir de Maristella Svampa, los colectivos, ONG's y agrupaciones juegan un papel no menor en la lucha contra el extractivismo. Esto ha "apuntado a la creación de una red densa de organizaciones y a la multiplicación de lugares de cruce" (Svampa, 2010).

De esta manera, por ejemplo, Esteva Cruz encuentra que en el caso del conflicto en Caballo Blanco, Veracruz:

[...] la organización ambientalista Lavida fue el eje rector de las acciones colectivas. Esta organización ciudadana es un ejemplo de redes que se han conformado para entender conflictos socioambientales. La articulación de actores multisectoriales y policlasistas puede ilustrar la red de redes que se conformó y que participó en el proceso de lucha. En ese sentido, Lavida fungió como actor decisivo; sin embargo, la esfera pública en la entidad veracruzana se reduce a un determinado número de organizaciones y corporaciones que se reactivan en momentos coyunturales (2016: 241).

En la base de datos, registré la presencia de redes a partir de los reportes periodísticos. Es decir, cuando se nombraba alguna organización, entonces registré que existían redes en ese conflicto. Por ejemplo, en Puebla, Morelos y Chiapas es común encontrarse con la presencia de REMA y Otros Mundos Chiapas; en Veracruz con Lavida, en Oaxaca con Podemos. A continuación tenemos el registro de presencia de redes, cruzada con oposición o negociación.



			Redes		Total
			No	Sí	
Oposición	No	Recuento	22	2	24
		% dentro de Redes	78,6%	6,9%	42,1%
	Sí	Recuento	6	27	33
		% dentro de Redes	21,4%	93,1%	57,9%
Total	Recuento		28	29	57
	% dentro de Redes		100,0%	100,0%	100,0%

Tabla 4. Tabla cruzada Oposición/Redes
Fuente: Elaboración propia con ayuda de SPSS

De los 33 conflictos de oposición, sólo en 6 no hay redes presentes. Esto quiere decir que los reclamos no están hechos desde un frente o movimiento organizado bajo el membrete de un movimiento amplio, ni tampoco hay presencia de alguna organización más amplia. Por otro lado, de los 24 conflictos de Negociación en dos sí hay redes: en Peñasquito, Zacatecas, y Aquila, Michoacán.

Conclusiones

Después de hacer cruces de variables de la base de datos, encontré que la vocación minera, la vocación campesina/carácter social y las redes de solidaridad (*aliados*) en los conflictos son de suma importancia. Las tablas cruzadas indican que:

Donde hay vocación minera (22 casos), el 72.7% de los conflictos son de negociación, frente al 27.3% que son de oposición. Y en lugares de No Vocación Minera (35 casos) el 77.1% de los conflictos son de oposición al proyecto minero, mientras que en el 22.9% de los casos se busca negociar;

Donde hay vocación campesina y/o población indígena (32 casos), el 75% de los conflictos son de oposición, mientras que el 25% restante son de negociación. A su vez, en los lugares de no población indígena (25 casos), en el 64% de los conflictos hay negociación frente al proyecto minero y en el 36% restante hay oposición;

Y que de los 33 conflictos de oposición, sólo en 6 no hay redes presentes y de los 24 conflictos de negociación en dos sí las hay.

Cuatro casos que podrían dar más luz sobre estos resultados pueden ser el del conflicto en Cerro de San Pedro, S.L.P, el conflicto en Zautla, en la Sierra Norte de Puebla, el conflicto en Mineral de la Luz en el estado de Guanajuato y el conflicto en San José del Progreso en los Valles Centrales de Oaxaca. Estos casos nos presentan una multiplicidad de factores tales como la diversidad socioeconómica, la forma como la



empresa intenta persuadir o coercionar a las comunidades, la cantidad de información disponible y la etapa en la que se encuentra en proyecto de extracción minera.

Notas

¹pavelmtz@gmail.com

Bibliografía

Esteva Cruz, K. (2016). Actores, participación y condicionantes en la lucha contra el proyecto minero Caballo Blanco. En M. G. Aguilar Sánchez, Resistencia y protesta social en el sureste de México. México: UAM Azcapotzalco.

Jiménez, S. P. (2014). Territorialidades contenciosas en México: el caso de la minería. Instituto de Geografía, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. México: UNAM.

Lemus, J. J. (2018). México a cielo abierto. De cómo el boom minero resquebrajó al país. México: Grijalbo.

Svampa, M. (2010). Movimientos sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina. Kassel: Unikasell Versitat.

Tetreault, D. (2014). Megaminería en México ¿Un camino hacia el desarrollo local y nacional? Estudios Críticos del Desarrollo, IV(7), 101-130.

Tetreault, D. (2014). Radiografía de la resistencia a la megaminería en México. Revista Académica Observatorio del Desarrollo, 2(7).



Articulação camponesa e conflitos socioambientais no cerrado: Impactos dos grandes empreendimentos agrícolas do matopiba- barra do ouro.

Rejane Medeiros¹
Valéria Pereira Santos²

Resumo

O artigo tem por objetivo apresentar os resultados da sistematização da pesquisa desenvolvida junto a articulação camponesa, sobre os impactos socioambientais sofridos pelos camponeses e camponesas na comunidade Tauá, no município de Barra do Ouro, Tocantins. A metodologia desenvolvida contou com registros de diário de campo, registros fotográficos e entrevista semiestruturada com camponeses e camponesas que moram na comunidade, assim como com a realização de mapa cartográfico. Também foram utilizados dados de pesquisa da CPT gerados a partir de trabalho de campo realizada no primeiro semestre de 2018. Os dados apresentados referem-se às informações a partir de um *survey*, cuja justificativa metodológica é parte dos estudos de Malinowski (1978). No qual o autor define como sendo uma “visão exploratória”, que implica numa observação direta das unidades familiares em seu cotidiano. O resultado apontou que mesmo diante dos impactos e avanços do agronegócio sobre os territórios camponeses, as famílias posseiras e ocupantes, cercadas por lavouras de soja e confinadas em pequenas áreas de terras inferior a 5 hectares desenvolvem a produção de alimentos através das roças de toco e de quintais produtivos, tendo como sistema de produção, o policultivo, que é uma combinação de espécies de plantas no mesmo espaço. E, que a luta pela proteção do cerrado é a grande matriz de sobrevivência dessa população.

Palavras chave

Articulação camponesa; Conflitos socioambientais; Empreendimentos agrícolas; MATOPIBA.

Introdução

O tema em estudo, conflitos ambientais no Cerrado: impactos dos grandes empreendimentos agrícolas do MATOPIBA- Barra do Ouro trata de uma pesquisa realizada junto à comunidade Gleba Tauá, atingida pela especulação imobiliária, devido ao projeto de desenvolvimento do agronegócio.



Como metodologia utilizou-se, registros de diário de campo, registros fotográficos e entrevista semiestruturada com camponeses e camponesas que moram na comunidade, assim como, a realização de mapa cartográfico que ocorreu por meio de uma oficina cujo objetivo foi mapear os conflitos. Os camponeses e camponesas foram orientados a desenhar de forma coletiva a realidade da comunidade. Também foram utilizados dados de pesquisa da CPT gerados a partir de trabalho de campo.

O mapeamento que é recurso metodológico da experiência do Projeto Nova Cartografia Social (PNCSA, 2008) que ocorre desde os anos de 2005 e tem como objetivo dar ensejo à auto-cartografia dos povos e comunidades tradicionais, comunidades do campo, das águas e das florestas. A cartografia se mostra como elemento de combate, e sua produção é uma possibilidade para a auto-afirmação social. Não se restringe a uma representação espacial da comunidade em forma de imagem. Constitui-se em uma descrição discursiva dos símbolos, das relações sociais, da ocupação do território, dos conflitos, das lutas e suas perspectivas. Trata-se de um documento descritivo da comunidade por meio de discursos, imagens fotográficas, mapa de auto-representação e histórias de vida. (Pinto, Wanderley, 2012).

Como resultado a atividade indicou que homens e mulheres das comunidades impactadas pela especulação imobiliária e grilagens de terra intensificada com o avanço do agronegócio nas terras dos camponeses, vivem um processo de destruição da produção da cultura e vida nesses territórios, e que as trajetórias de vida são demarcadas pela expulsão das terras, conflitos e violências, mas também de muita resistência.

Para o entendimento desse processo histórico da produção do latifúndio no Brasil, apresentar-se-á, no tópico a seguir, uma síntese do histórico da formação do latifúndio e a relação com a política, com o objetivo de conhecer os aspectos, sociais, políticos e econômicos desse processo e, especialmente compreender porque até hoje essa questão não foi resolvida.

Processo de formação do latifúndio no Brasil

Para Medeiros (2017b), O processo de formação do latifúndio no Brasil teve início a partir do século XVI, com a invasão das terras brasileiras pelos portugueses, com o objetivo de garantir sua posse e transformá-lo em sua colônia. A consequente implantação do regime das capitanias hereditárias organizou a colônia em doze setores, outorgando a titulares de confiança do reino a administração das áreas doadas, foi uma estratégia de dominação e exploração caracterizando o processo de colonização. Com



isso, a grande propriedade se somou à prática do monocultivo, na qual o objetivo final foi o mercado externo. Para explorar esta grande propriedade, surgiu a necessidade de mão de obra, que se realizou pela escravização dos povos originários que não se adaptou ao sistema de trabalho imposto, provocando tensões e causando resistências. A solução deste problema foi, portanto, a escravização do negro trazido a força da África, dando início ao que se denominou como o ciclo da cana-de-açúcar. (Medeiros, 2012a).

Implica dizer que as formas de sociabilidades, significam muito mais do que a plantação, mais do que apenas a unidade de base de um processo de produção agrícola, isto é, sobretudo, a matriz da sociabilidade no mundo rural da primeira metade do século XX, no qual o grande domínio é a sede das residências dos grandes proprietários, as “casas grandes” do qual tratou Gilberto Freyre (1977). É no interior das fazendas que se exerce a vida familiar, onde se nasce, se casa, procria-se, onde se enterram muitas vezes os mortos. Nesse sentido, Garcia (2003, p. 163) contribui para essa reflexão chamando atenção para o fato de que a “Casa-grande” continua sendo o lugar onde se comanda a vida no mundo rural:

[...] No próprio título de sua obra maior – Casa-grande e Senzala –, Gilberto Freyre (1933) assinalava como a sede dos domínios rurais era uma instituição que continuava a operar mesmo após a abolição da escravatura em 1888 e como a reunião de poderes econômicos, religiosos, culturais e políticos em uma só mão funcionava como princípio ordenador do mundo social, recriando, por uma lógica que supõe complementaridade, mas diferença irreduzível, o mundo dos descendentes dos senhores das casas-grandes e aqueles dos escravos das senzalas.

Por isso, as diferenças entre as formas de produção da vida no mundo rural subjazem a produção de sociabilidade desenvolvida na matriz da formação social do Brasil, que apresenta marcas de autoritarismo, preconceitos, mandonismo. Isso quer dizer que, sendo o domínio rural como unidade de base constituidora da economia colonial, na qual a dinâmica era impulsionada pelos centros internacionais onde se destina as lavouras comerciais, as relações de sociabilidades estavam mediadas pelas relações de produção adotadas na organização da matriz agrícola de produção.

Nesse sentido, a conjuntura histórica e geopolítica colonial legou à América Latina a pior distribuição de terras em todo mundo: 51,19% das terras agrícolas estão concentradas nas mãos de apenas 1% dos proprietários rurais, conforme levantamento da Oxfam. Ocupando o 5º lugar no ranking de desigualdade no acesso à terra, o Brasil tem 45%



de sua área produtiva concentrada nas propriedades superiores a mil hectares – apenas 0.91% do total de imóveis rurais. (Atlas Agronegócio, 2018, p. 14).

A origem disto é a Lei nº 601, de 1850, que se intitulou como Lei de terras, definida pelo conselho de Estado da época. Entre outras normas, essa lei estabelecia que o direito de possuir terra só seria possível por meio da compra e venda. Fato que beneficiou direta e indiretamente os latifundiários, pois estes detinham o poder econômico e, conseqüentemente, o fundamento jurídico e político de possuir a terra. A principal característica era implantar por meio da normatização no Brasil a propriedade privada das terras.

Art. 1º - Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. [...]. Art. 2º - Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nelas derrubarem matos ou lhes puserem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de benfeitorias e, demais sofrerão a pena de dois a seis meses de prisão e multa de cem mil réis [...]. (Lei Da Terra n. 601, 1850, p.285 apud Stedile, 2005).

A história da questão agrária no Brasil apresenta transformação no uso das terras, em que passa a existir a possibilidade de que qualquer cidadão brasileiro possa se transformar em proprietário de terras. Entretanto, este cidadão deveria comprar as terras da Coroa, o que impossibilitava os “ex-trabalhadores escravizados, ao serem libertos, se transformarem em camponeses, em pequenos proprietários de terra”. Isso não poderia acontecer, pois, sem recursos para pagar as terras à Coroa, era impossível o acesso à mesma.

Esse processo gerou conflitos agrários que até hoje se constitui como sementeira de violência entre camponeses e latifundiários. A partir da história dos conflitos e do processo de organização dos camponeses no século XX, pode-se afirmar que a formação do campesinato no Brasil se deu por meio de violência. Os camponeses, historicamente, precisaram disputar a terra com os latifundiários, que produziram violência e medo para expulsar os camponeses da terra. Esse processo aconteceu com ações violentas: desde ameaças diretas dos grileiros, terror promovido pelos jagunços até organizações de grupos armados para expulsão de quem insistisse em continuar na terra.

Como resultado do processo, tem-se a ocupação de terras por “sertanejos”, como ficaram conhecidos os camponeses que ocuparam o interior do Nordeste, Goiás e Minas Gerais. Isso ocorreu com o intuito de organizarem suas unidades familiares e desenvolverem a produção de subsistência. Movendo-se pelo país como retirantes, os



camponeses brasileiros, a seu modo, foram se inserindo no campo. Nessa perspectiva é que as comunidades Boa Esperança e Vitória foram se constituindo. E, hoje sofrem violentos processos de perseguições e desapropriações.

Os dados preliminares do Censo Agropecuário 2017 (sem os grandes produtores) mostram que a terra está ainda mais concentrada nos estabelecimentos com 1.000 hectares ou mais, que agora ocupam 47,5% da área, enquanto a área ocupada pelos estabelecimentos médios (entre 100 e 1000 ha) diminuiu para 32% da área total. Os grandes estão engolindo os médios. Também houve alteração na dinâmica da posse da terra, na qual destaca-se a duplicação da área ocupada por arrendamentos. Fica cada vez mais claro que temos dois negócios no agro brasileiro: o de produção e o de terras. (Pinto, Valor, agos. 2018).

O autor, adverte que o Censo Agropecuário de 2017 aponta que desde 2016, segue as tendências do aumento da produção, da produtividade, da concentração de terras e rendas, e, sobretudo das desigualdades sociais. E, o IBGE, saliente que ainda falta processar os dados das empresas e grandes produtores, o que deve acentuar cada vez mais as assimetrias. Destaca-se que, a estrutura fundiária de um país é, em grande medida, resultado das lutas entre latifundiários e camponeses pela posse das terras.

Nesse sentido, é que o conceito de estrutura fundiária liga-se à questão da distribuição de terras em uma determinada sociedade e quanto mais desigual a distribuição das terras mais concentrada será a estrutura fundiária. Isso impõe um elemento importante nas lutas sociais: a disputa entre os camponeses e os latifundiários; uma vez que onde os camponeses foram capazes de impor sua força de luta aos monopolistas do latifúndio a estrutura fundiária tornou-se mais democrática; ao contrário, onde as forças do latifúndio predominaram sobre a força das lutas camponesas a concentração fundiária é mais concentrada, poderosa e opressora.

Articulação Camponesa: Organização das comunidades na luta pela terra

A organização das comunidades camponesas através da Articulação Camponesa, surge em 2011, num contexto de injustiça social e violações de direitos no campo tocantinense. Sendo uma iniciativa que articula processos de luta pela terra e territórios, a Articulação Camponesa de Luta pela Terra e Territórios, é formada por 28 comunidades de camponeses/as posseiros, quilombolas, ocupantes e acampados da região centro norte do Tocantins.

Nos últimos oito anos, a resistência dessas comunidades no enfrentamento ao agronegócio se intensificou. Pois além da luta pelos territórios e pela posse da terra, a



pressão e incidência exercida pela Articulação Camponesa ocorre pelo acesso às políticas públicas que fortaleçam os modos de vida das comunidades do campo que estão em situação de vulnerabilidade social.

A metodologia de ação/organização da Articulação Camponesa, se dá através do trabalho de base e formação política que tem como princípio a Educação Popular: realização de encontros de formação que possibilitam a integração e o respeito da diversidade cultural entre os povos; fortalece a de troca de experiência, a mística e a espiritualidade; a construção de estratégias de lutas e pautas conjuntas, fazendo com que as famílias se sintam mais confiantes e autônomas a exigirem seus direitos ao acesso à terra e às políticas públicas (infra estruturas, educação, saúde e outras). Esse processo formativo que conta com o apoio da Comissão Pastoral da Terra Araguaia-Tocantins tem sido um espaço de aprendizados, mas também, espaço de definição de ações conjuntas.

Comunidade Tauá: História e memória

A comunidade Tauá, localiza-se na região nordeste do Tocantins, as margens do rio Tocantins e do rio Tauá, no município de Barra do Ouro. Possui uma população de 4.123 pessoas, localiza-se à 419 km de Palmas. É uma área de terra da União Federal que está em disputa judicial entre oitenta e duas (82) famílias camponesas de posseiros e ocupantes com um fazendeiro, que é um grande produtor de soja catarinense que alega propriedade de 17.735,000 hectares de terra. Essa é uma das comunidades camponesas de posseiros tradicionais da região nordeste do Tocantins, que foi formada por famílias que viviam em terras comuns de forma itinerante.

A comunidade Tauá se autodenomina tradicional, que neste caso são, as primeiras famílias a se fixarem nessa terra, na década de 1950, eram famílias camponesas que migraram do estado do Maranhão para o norte de Goiás (atual Tocantins) em busca de terra e melhores condições de vida.

No início, Tauá era uma comunidade bastante populosa, ocupavam as terras, principalmente nas margens dos córregos, e por isso, alguns córregos têm o nome dos antepassados (Cabeceira do Rosa, Cabeceira do Duque etc.). Em 1952 ocorreu a fixação das primeiras famílias na Gleba Tauá e a terra era comum e somente em 1980 ocorreu a Arrecadação da Gleba Tauá pelo Grupo Executivo de Terra do Araguaia Tocantins (GETAT) e fracionamento da terra em lotes titulados para algumas pessoas.



Na fala de moradoras e morador antigo da Gleba, como a Dona Carmina, Dona Raimunda e Seu Ananias, recordam que a comunidade Tauá tinha outra forma de viver a vida, era mais tranquilidade e conseguiam fazer as festas surpresas e juntar toda a população. “O povo ia a pé ou cavalo, mais iam, sempre tinha festa”. Mas, nos últimos tempos, segundo Dona Carmina, não se faz mais festas, apenas as celebrações e poucas pessoas vão.

A mudança, segundo eles, veio com o corte das terras, que individualizou as propriedades e provocou o desassossego de muitas famílias. E a partir de 1950 a terra da comunidade Tauá era comum a todos, não era loteada. A roça era colocada dentro do território, depois os camponeses/as iam para outras áreas, pois como cultura, eles/as deixavam a terra descansar. A território comum, segundo Almeida (2008, p. 29), pode ser definido pelas normas próprias e pelo uso coletivo dos “recursos naturais”. Assim, a territorialidade funciona como fator de identificação, defesa e força, mesmo em se tratando de apropriações temporárias dos recursos naturais, por grupos sociais classificados muitas vezes como “nômades” e “itinerantes”.

Foi a partir dos anos de 1990, que os conflitos começaram na comunidade, em relação às invasões de terras por fazendeiros de Lajes, Santa Catarina, região sul do Brasil. Para os camponeses/as, quando esses invasores chegaram na região, portando máquinas para trabalhar a terra, expulsando moradores, desmatando para produzir soja. Os moradores titulados foram pressionados com uso de violência para venderem suas terras. Os fazendeiros usaram desde queima das casas a assassinato de animais. Com medo as famílias não encontravam apoio e venderam suas terras para os fazendeiros/grileiros, na qual muitas vezes portando documentos das terras ameaçavam a comunidade.

Em 1992 ocorreu a grilagem das terras dos camponeses/as da Gleba Tauá. Em 2009 as terras foram fracionadas em quinze partes, sendo lotes menores a 1.200 hectares, pois dessa forma era possível enquadrar nos critérios da Lei de Regularização Fundiária n. 11.952/2009. A venda das terras resultou no total de R\$ 173.000,00, sendo R\$ 14,00 o hectare da terra. Com o processo do cadastro das quinze áreas no Programa Terra Legal, foi requerido a titulação dos lotes (Terra Legal, 2012). E, em 2010, as dezoito famílias de posseiros fizeram o cadastramento no Programa Terra Legal para regularizar suas áreas de posse. E nesse mesmo ano, os camponeses(as) passam a ser alvo da primeira Ação de Reintegração de Posse movida pelo grileiro.

Nos anos de 2011 e 2012, houve a intensificação dos conflitos, onde os camponeses/as sofreram forte perseguição por parte dos fazendeiros, inclusive com ameaças de morte, com disparos de arma de fogo e a presença de pessoas estranhas circulando a comunidade, em especial sua casa. O conflito até hoje continua sendo o mote dos empresários e fazendeiros para provocar a expulsão dos mesmos.

Mapa da realidade

Para Almeida (1995, p. 27), o processo de produção de mapas organiza situações que surgem como desordem no mundo social.

O processo de produção do mapa reflete antes de tudo as dificuldades de se tentar ordenar situações e mecanismos legais de intervenção que aparecem sob o signo de uma suposta desordem no mundo social. Mediante o amplo desconhecimento das realidades localizadas e a não-atualizadas de informações elementares, pelas instituições públicas e pelos organismos de planejamento, pode-se afirmar que o descontrole funcionaria como forma de controle social.

A visão das comunidades sobre seu território, demarca o conhecimento geográfico e histórico do lugar onde vivem e o sentido relacional que estabelece com os elementos materiais e imateriais do território, nesse sentido é que o aporte metodológico utilizado para organização dos mapas atribui um sentido maior aos conflitos sofridos pelos camponeses e camponesas em seus territórios. Visto que, muitas vezes vivem silenciadas pela hegemonia do discurso dos atores privados e do discurso desenvolvimentista do Estado, no qual esses atores, tanto institucionais, como privados, silenciam e subalternizam as experiências coletivas das populações e comunidades que vivem nos territórios ameaçados pelo agronegócio.



Figura 1 e 2. Mapa social-Gleba Tauá.
Fonte: Autora, Gleba Tauá, 2019.



O processo cartográfico e os mapas enquanto produtos, se constituem em materiais pedagógicos, investigativos com informações importantes sobre a vida das populações e comunidades nos territórios, as representações das fronteiras, e, especialmente, as denúncias desde a afirmação e desde o silêncio. A experiência com o mapa realizado na comunidade aponta para denúncias e anúncios no enfrentamento aos conflitos agrários e a violência sofrida pelos/as camponesas/es.

O mapa da realidade foi realizado com a participação e elaboração de homens e mulheres da comunidade. O desenho aponta para elaboração de elementos da vizinhança, produção e as casas, apontando preocupação com a falta de água.

No Brasil, as classes dominantes insistem e defendem a atual estrutura fundiária, marcada historicamente por elevada concentração da terra. Ainda no âmbito dessa opção política conservadora, de natureza neoliberal, as classes dominantes negam a reforma agrária e contribuem para a contínua concentração da renda e de riqueza no país. A essa política conservadora se alinham iniciativas governamentais que facilitam a apropriação privada dos bens naturais e a exploração dos povos do campo e da floresta. A concentração da terra, a grilagem de terras públicas, a devastação das florestas, da vida dos povos que vivem nesses espaços são atrocidades provocadas pelo avanço do grande capital sobre a vida dos camponeses.

A fronteira agrícola é um dos grandes fatores de concentração fundiária no Tocantins, isso porque sua localização geográfica é estratégica, possuindo uma topografia favorável para a exploração da atividade agrícola, com seus recursos hídricos, as vias de acesso e o incentivo das instituições públicas à expansão do agronegócio, a produção agrícola e a agropecuária, o que possibilita o aumento da concentração fundiária e a elevação do índice das desigualdades sociais resultando em diversos conflitos no campo.

Destaca-se que a população do Tocantins é formada em grande parte por migrantes, que vem dos estados do Maranhão, Pará e Goiás. Os provenientes de outros Estados são 35,1% (no Brasil os migrantes nacionais são 19%), estando 74% no espaço urbano. É também uma população jovem, sendo que 48% da população têm menos de 19 anos (no Brasil esse índice é de 40%) e a densidade populacional do Estado é de 4,2 habitantes por Km². A taxa anual de crescimento populacional situa-se na faixa de 2,6%, contra 2,9% da região Norte e 1,6% do Brasil. Em relação à cor ou raça, a população do Tocantins é formada por 60,6% de pardos, 30,6% brancos, 7,1% pretos, 0,2% amarelos e 0,9% de indígenas (Síntese De Indicadores Sociais, IBGE, 2016).



Quanto à questão fundiária no estado do Tocantins, os dados da quantidade de imóveis registrados pelo INCRA em 2012 perfazem um total de 72.302 propriedades, isso representa em relação à região Norte 1,3% que estão situadas numa área de 26.725.434, 1 hectares, o que representava em relação à região Norte 4,5% do total de área da região. Já em 2014, os dados relacionados ao número de imóveis no Estado apresentam um total de 78.928 propriedades, o que soma em relação à região Norte 1,3% espacializados numa área de 29.994.147, 8 hectares o que representa em relação à região Norte 4,1% do total de área da região. Os dados sob a quantidade de imóveis relacionados a 2012 e 2014, identifica uma diferença de 8,4% entre esses anos.

Observa-se uma prática recorrente no que se refere à regularização de terras públicas no Tocantins, apropriadas, indevidamente, por grileiros e com a anuência do Estado. Nesse caso, a regularização ocorre por meio de um Programa criado pelo governo Federal, denominado de “Terra Legal”, desenvolvido e sob a gestão do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Instituto Nacional de Colonização Rural (MDA/ INCRA).

Nesse cenário da estrutura agrária brasileira, o campo se constitui como o lugar de disputas pelas terras, entre o poder do grande latifúndio que se transveste de agronegócio e os camponeses em defesa da terra para viver e produzir. Assim é que o relatório “Conflitos no campo no Brasil”, publicado anualmente pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), (seu primeiro número foi em 1985), apresenta dados sobre as ocorrências de violência contra trabalhadores rurais.

No Tocantins, os conflitos por terra aumentaram 313% em 2016, um aumento de 99 ocorrências em 2016 (Pastoral Da Terra, Edição extra, conflitos no campo, Brasil, Ano 42, nº 228, 2016, p.4).

O aumento preocupante da violência no campo se insere no clima de tensão política que vive o país atualmente. Configura-se em um total descumprimento da Constituição Federal brasileira (1988), quando apresentam e aprovam projetos que a ferem.

Os camponeses/as da comunidade Tauá relataram na oficina realizada que sofrem constantes presenças de pistoleiros e também do fazendeiro grileiro na área da comunidade. Os fatores geradores de conflitos, são, plantios de soja nas proximidades da comunidade, mudança de governo, perda dos direitos conquistados, mudanças climáticas, desmatamentos provocando a falta de chuvas; animais soltos (gado), nas proximidades da comunidade, falta de água; transporte escolar sem regularidade; conflito com grileiro; Veneno que são jogados na soja e atinge a produção e córregos



da comunidade, matando animais e adoecendo as famílias, falta energia elétrica; roças destruídas pelo gado do fazendeiro; acesso limitado ao ensino médio e escolarização para os adultos; demora para criação do assentamento; falta de renda na comunidade e desmatamento na divisa da comunidade para plantio de soja. Para a comunidade, algumas ações são imprescindíveis para o enfrentamento desses problemas, que vem se intensificando com o avanço do agronegócio e a especulação imobiliária na região.

Considerações

O exercício da cartografia social superou a simples realização do mapeamento coletivo, como prática de apropriação de técnica de mapa, uma vez que partiu das experiências e representações prévias, da memória dos camponeses/as que vivem no território. A oficina realizada na comunidade ocorreu por meio de linha do tempo sobre suas histórias. Expressa a partir da chegada dos primeiros ocupantes e dos conflitos existentes.

Os resultados da pesquisa apontaram que os territórios estão em conflitos com latifundiários que grilaram terras públicas e, que contaram com a colaboração do Estado para documentar tais terras, como por exemplo, titular terras através do programa terra legal. É uma região com grandes impactos do agronegócio, soja, eucalipto, e, por esta razão possui especulações imobiliárias em torno dos territórios camponeses. Sobre o exercício da metodologia e técnicas de investigações participativas necessita de reinterpretações que possibilite a prática de processos adequados dos desafios históricos particulares e a mudanças geográficas concretas e, sobretudo aos processos de organização social das comunidades.

Ao realizar o mapa, revela-se os elementos materiais e imateriais contidos nos territórios, e sobretudo as relações de poder contidas nele. A pesquisa revelou que o avanço do agronegócio sobre as comunidades provoca disputas internas, enfraquece a luta, isso ocorre pela violência que os povos são submetidos, inclusive a cooptação por parte dos fazendeiros. Nessa direção, Shiva (2003), adverte que o agronegócio destrói e planta ilusões de desenvolvimento às populações e que a diversidade é erradicada como erva-daninha e as monoculturas uniformes, tanto de pessoas, quanto de plantas, são administradas de fora, deixando de ser autorreguladas e autogeridas pelas comunidades e saberes locais.

Nessa mesma perspectiva, compreende-se que o projeto de mundialização do agronegócio, impõe um paradigma de produção. Sendo que o termo agronegócio corresponde aos processos sociais e políticos, resultam de um esforço consciente da



burguesia para reposicionar o lugar da agropecuária e investir em novas formas de produção. E, especialmente, indica processos de mudanças que tem sua ligação com o cotidiano dos camponeses. Todavia é que, “[...] à medida que o termo agronegócio se impõe como símbolo da modernidade, passa a ser identificado, pelas forças sociais em disputa, como o novo inimigo a ser combatido”. (Silva; Medeiros, 2012, p. 85).

Finalmente, transformar o mapa em um processo participativo de cartografia social uma oportunidade para uma sistematização de conhecimento locais sobre o território habitado, como também para a denúncia dos conflitos e injustiças sofridas.

Notas

¹Universidade Federal do Tocantins. rejmedeiros@uft.edu.br

²Universidade Federal do Tocantins. valeria_sants@yahoo.com.br

Referências

Atlas do Agronegócio. Disponível em: <<https://bit.ly/35gJcNQ>>. Acesso em: 14/10/2018.

Almeida, Alfredo Wagner Berno de; Carajás, a guerra dos mapas. 2ª edição. Belém: Seminário Consulta, 1992.

Brasil. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *SIT – Sistema de Informações Territoriais*. 2010. Disponível em: <http://sit.mda.gov.br>. Acesso em: 14/10/2018.

Freyre, Gilberto. *Casa grande e Senzala*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977.

Garcia, Afrânio. A Sociologia rural no Brasil: entre escravos do passado e parceiros do futuro. *Dossiê. Sociologias*, Porto Alegre, ano 5, nº 10, jul/dez 2003, p. 154- 189.

Martins, José de Souza. *Os camponeses e a política no Brasil: as lutas sociais no campo e seu lugar no processo político*. Petrópolis: Vozes, 1990.

Medeiros, Leonilde Servolo de. Latifúndio. In: Caldart, Roseli, Salette et al. (Orgs.). *Dicionário da Educação do Campo*. Rio de Janeiro: Expressão Popular, 2012a.

Medeiros, Rejane. Cleide. Práxis política do movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra (MST/TO): trajetória de organização e formação política. 2017. Tese (Doutorado em Sociologia). Faculdade de Ciências Sociais: Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017b.

Nova Cartografia Social Da Amazônia. 2018. Disponível em: <<https://bit.ly/38ZVb3g>>. Acesso em: 12/09/2019.

Oliveira, Arioaldo Umbelino de. Camponeses, indígenas e quilombolas em luta no campo: a barbárie aumenta. In: *Cadernos de Conflitos no Campo*. Brasil, 2016.



Pinto, Luis Guedes. No censo agropecuário, mas concentração e exclusão. Disponível em: <<https://www.valor.com.br/opiniao/5781479/no-censo-agropecuário-mais-concentração-e-exclusão>>. Acesso em: 14/10/2018.

Pinto, Raquel Giffoni, Wanderley, Luiz Jardim de Moraes. Memória e Resistência: a experiência do mapeamento participativo da comunidade Quilombola de Linharinho, Espírito Santo. In: Cartografia social e dinâmicas territoriais: marcos para o debate. Henri Acselrad (org.). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 2012.

Shiva, Vandana. Monoculturas da mente. São Paulo: Gaia, 2003.

Stedile, João Pedro (Org.). História da questão agrária no Brasil. In: _____. *A questão agrária no Brasil: o debate tradicional: 1500-1960*. São Paulo: Expressão Popular, 2005.



La paradoja entre diálogo y confrontación en los conflictos sociales vinculados con empresas mineras: Estudio comparado sobre los factores contextuales.

Mario Pasco Dalla Porta¹

Resumen

En las últimas décadas existe una creciente conflictividad social en el sector minero en América Latina. Si bien las empresas y los gobiernos han diseñado e implementado diversos mecanismos para promover el diálogo con las comunidades locales, la confrontación social en estos espacios es cada vez mayor. Esta investigación pretende explicar esta paradoja mediante un análisis detallado sobre la manera en que los factores contextuales fomentan la confrontación y desincentivan el diálogo entre los actores involucrados. El estudio se enfoca en dos contextos de mega-minería: Catamarca en Argentina (minas Bajo de la Alumbrera y Agua Rica) y Cajamarca en Perú (minas Yanacocha y Conga).

Palabras clave

Conflictos sociales; Industrias extractivas; Políticas neoliberales; Gobiernos sub-nacionales; Estructuras de movilización.

Introducción

En las últimas tres décadas, la región latinoamericana ha aplicado políticas neoliberales para atraer capital externo hacia el sector minero (Haslam & Tanimoune, 2016; Glave, 2012; Bebbington, Hinojosa, Bennington, Burneo & Waarnaars, 2008; Sánchez, Ortiz & Moussa, 2001). Esto produjo un enorme incremento en los proyectos mineros, en especial en espacios rurales. Este crecimiento ha estado acompañado por múltiples efectos negativos en los planos ambiental, económico y socio-cultural. Previsiblemente, la resistencia social en el sector también ha experimentado un incremento notable. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, 2019) registra más de 250 conflictos importantes en la región latinoamericana, con altos costos en términos de vidas humanas, activistas encarcelados, destrucción de la propiedad pública y privada, y cancelación de proyectos mineros.

El incremento en el conflicto y el reclamo de muchos actores locales por la defensa de sus derechos condujeron a que los gobiernos y las empresas mineras apliquen un “giro dialógico” en su forma de aproximación a las comunidades aledañas. En esa línea,



desde inicios de la década pasada las empresas han desarrollado iniciativas de responsabilidad social corporativa enfocadas en potenciar la comunicación e involucramiento con las comunidades respecto de las iniciativas de desarrollo social y económico territorial, en tanto que los gobiernos han incorporado procesos de consulta y mediación con los actores involucrados.

El resultado de estos esfuerzos ha sido paradójico, pues la conflictividad social ha crecido. La intensa e incluso violenta confrontación ha predominado sobre el diálogo en estos contextos. Es ilustrativo que la mayoría de mega-proyectos mineros haya enfrentado intensos conflictos sociales y que más de 30 de ellos hayan quedado paralizados (OCMAL, 2019).

Este estudio pretende aportar luces sobre esas contradicciones. Para ello, se parte por a) evidenciar esa paradoja en dos contextos de intenso conflicto social vinculados con proyectos de mega-minería, para luego b) explicar de qué manera determinados factores contextuales intensifican la confrontación y desincentivan el diálogo entre los actores involucrados.²

El documento está organizado en cinco secciones. La primera sección proporciona el marco analítico que fundamenta el problema estudiado. A continuación se describe la metodología de investigación aplicada en el estudio. La tercera sección presenta evidencias sobre la paradoja entre coerción y diálogo antes mencionada. Las siguientes dos secciones se ocupan de los factores políticos, económicos, sociales y administrativos que intensifican la confrontación. El documento concluye con una reflexión final sobre los distintos temas abordados.

Marco analítico

Durante las décadas de los setentas y ochentas, la investigación sobre movimientos sociales fue revitalizada considerando la diversidad de actores y formas de confrontación asociadas con los *nuevos movimientos sociales* (Touraine, 2006; Laclau, 1985; Melucci, 1985; Offe, 1985; Habermas, 1981/1989). En los noventas, la *perspectiva de los procesos políticos* adquirió gran relevancia al analizar conjuntamente tres aspectos fundamentales: oportunidades políticas (configuración de posibilidades y desafíos a nivel sociopolítico), estructuras movilizadoras (canales formales e informales para la movilización social) y procesos de encuadre (esquemas compartidos para legitimar la acción colectiva) (McAdam, McCarthy & Zald, 1996).



En esta aproximación, el análisis de las *dinámicas de contención* dio particular énfasis al despliegue de episodios (flujos continuos de acción colectiva), procesos (sucesión de mecanismos para transformar las interacciones sociales), mecanismos (conjunto delimitado de eventos que producen transformaciones similares) y repertorios (grupo de rutinas específicas aplicadas deliberadamente) (McAdam, Tarrow & Tilly, 2001).

Estos enfoques resaltan la relevancia de los aspectos contextuales sobre la acción colectiva. Esto incluye las configuraciones políticas, las dinámicas económicas y los patrones socio-culturales que estructuran las relaciones entre los actores en determinados territorios.

En las últimas décadas, muchos investigadores han planteado una conexión directa entre la consolidación del neoliberalismo global y la movilización social. Para Harvey (2007), el neoliberalismo es un esquema de prácticas político-económicas que defiende la idea de que el bienestar de las personas requiere potenciar la aplicación irrestricta de la lógica del mercado. Esto se ha reflejado en múltiples políticas para privatizar, desregular y liberalizar las economías. Entre los impactos negativos de estos cambios se encuentran la acumulación por despojo, la mercantilización de las relaciones sociales, la afectación de derechos fundamentales de las personas y el deterioro ambiental (Harvey, 2007; Harvey, 2003; Hardt & Negri, 2009; Žižek, 2009).

En América Latina, este marco neoliberal ha favorecido la inversión extranjera en el sector minero, aprovechando los incentivos fiscales, facilidades administrativas y laxas exigencias ambientales concedidas por los gobiernos (Haslam & Tanimoune 2016; Álvarez Huwiler, Godfrid & Duárez, 2016; Svampa & Antonelli, 2010; Liverman & Vilas, 2006; Reed, 2002; Sánchez, Ortiz & Moussa, 2001). Esto ha sido particularmente sintomático en Argentina, Chile y Perú. Las corporaciones mineras y los gobiernos han promovido activamente los beneficios de una “nueva minería” basada en tecnologías limpias y el desarrollo económico local (Svampa & Viale, 2014; Rodríguez Carmona & Castro, 2013; Alayza & Gudynas, 2012; Gudynas, 2011; Bebbington, Hinojosa, Bennington, Burneo & Warnars, 2008).

Este paradigma extractivista ha conllevado problemas sustantivos en los territorios involucrados en varios planos: ambiente (afectación de la salud de las personas y contaminación de los ecosistemas), economía (disputas por la propiedad, cambios en la matriz productiva y limitado empleo local), sociedad (disrupción y fragmentación social) y política (ingobernabilidad) (Saade Hazin, 2013; Damonte, 2012; United Nations, 2012; Damonte & Glave, 2012; Bebbington, Hinojosa, Bebbington, Burneo & Warnars,



2008; Bebbington, Bebbington, Bury, Lingán, Muñoz & Scurrah, 2008; Alao, 2007; United Nations Conference on Trade and Development, 2007; Biekart, 2005; Castro Soto, 2005; Banks, 2002; Reed, 2002).

Las transformaciones neoliberales han provocado un incremento en la conflictividad social en América Latina (Wasserman, 2017). Buena parte de esos movimientos están directamente conectados con los efectos negativos de las corporaciones mineras (Arce, 2015). En estos movimientos se despliegan repertorios contenciosos disruptivos que frecuentemente conducen a la represión social. La secuencia recurrente en estas dinámicas incluye las denuncias públicas, primeras movilizaciones, paros colectivos, marchas ampliadas, bloqueos de carreteras y represión de las fuerzas del orden (Álvarez Huwiler, Godfrid & Duárez, 2016; Franklin, 2015; Calderón, 2012; Silva, 2012).

Aunque a nivel teórico hay literatura sobre estas dinámicas contenciosas, por lo general los estudios empíricos suelen centrarse más en la violencia colectiva que en el diálogo (Tilly, 2005; Della Porta & Diani, 2006), prestando poca atención a la paradoja inherente. Los escasos estudios regionales que han tematizado las dinámicas confrontacionales también han priorizado el abordaje de la violencia, señalando las escasas posibilidades del diálogo (Kemp, Owen & van de Graaff, 2012; Calderón, 2012).

No se han identificado estudios que aborden sistemáticamente la paradoja entre confrontación y diálogo en el sector minero en la región, como tampoco aquellos que eluciden los factores contextuales que inciden sobre esas dinámicas colectivas. Esta investigación pretende contribuir con ese vacío en los estudios sobre movimientos sociales en un sector estratégico para muchos de los países de la región.

Metodología

El diseño metodológico de la investigación incluyó el estudio de caso, el abordaje comparativo y el *process-tracing* (rastreo de procesos). El estudio de caso se basa en una aproximación detallada sobre un fenómeno social delimitado usando diferentes fuentes de evidencia (Yin, 2008; Gerring, 2004; Stake, 1994). El esquema comparativo se centra en contrastar diferentes escenarios sociales en función de determinados planteamientos teóricos (Pennings, Keman & Kleinnijenhuis, 2006; Lijphart, 1971; Przeworski & Teune, 1970). Finalmente, el *process-tracing* se enfoca en un examen pormenorizado de los eventos para elucidar posibles nexos causales (Bennet, 2010; Gerring, 2006; George & Bennet, 2005).



Para la selección de los contextos se hizo una revisión sistemática de varias bases de datos sobre conflictos mineros en la región, en especial la del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Los criterios de selección incluyeron casos vinculados con mega-proyectos mineros que involucren corporaciones transnacionales y que presenten múltiples trayectorias contenciosas. De ese modo, se seleccionaron dos contextos: Catamarca (Argentina) y Cajamarca (Perú).

El primer contexto involucra dos proyectos mineros ubicados en los departamentos de Andalgalá, Belén y Santa María. Bajo de la Alumbreira es una mina de cobre y oro que se encuentra en operaciones desde 1997. La propiedad de este proyecto corresponde a la empresa pública Distrito Minero Agua de Dionisio (20%) y a Minera Alumbreira (80%), una *joint venture* conformada por Glencore Xstrata (50%), Goldcorp Inc. (37.5%) y Yamana Gold Inc. (12.5%). Agua Rica es una mina de cobre, oro, plata y molibdeno cuya explotación quedó paralizada en 2010 tras un intenso conflicto social. Este proyecto pertenece a Yamana Gold Inc.

El segundo contexto también involucra dos proyectos mineros localizados en las provincias de Cajamarca y Celendín. Yanacocha es una mina de oro que opera desde 1993. La mina pertenece a Newmont Mining Corporation (51.35%), Compañía Minera Buenaventura (43.65%) y Corporación Financiera Internacional (5%). Finalmente, Conga es una mina de oro y cobre cuya explotación fue paralizada en 2012 luego de un fuerte conflicto social. Este proyecto pertenece a los mismos accionistas.

La información fue recolectada mediante diversas visitas a ambos contextos entre enero de 2015 y diciembre de 2016. Durante esas visitas se hicieron entrevistas a 59 actores clave en el conflicto y se recopiló información en archivos públicos y privados sobre 3690 tácticas de contención. El análisis del caso requirió procedimientos de codificación de las entrevistas así como la identificación de patrones estadísticos en la base de datos de tácticas contenciosas. El análisis concluyó en febrero de 2019.

Dinámicas contenciosas y orientación coercitiva/dialógica

Los dos contextos investigados reportan causas similares de los conflictos sociales: afectación de los ecosistemas, apropiación de recursos colectivos, limitado impacto en las economías locales, alteración de patrones socio-culturales y déficit de gobernabilidad. La confluencia de estos problemas ha generado múltiples procesos de resistencia social.



El trabajo de campo permitió la identificación de 1732 tácticas contenciosas en Catamarca y 1872 en Cajamarca. En ambos casos se diferenciaron siete grandes episodios de contención donde se constata la alternancia de periodos de relativa calma e intensa confrontación (Della Porta & Diani, 2006). Usualmente la secuencia inicia con el lanzamiento y primeros años operativos del proyecto, seguida por un periodo de paulatina movilización conforme se visibilizan los primeros impactos negativos de la minería. Luego surgen distintos episodios de intensa confrontación, para finalmente transitar hacia una etapa de dispersión y juridización del conflicto. Conforme avanza el conflicto se observa también una creciente diversidad en los actores y territorios alineados a favor o en contra de los proyectos mineros, reflejando la naturaleza altamente heterogénea de estos movimientos sociales (Touraine, 2006; Laclau, 1985; Melucci, 1985; Offe, 1985; Habermas, 1981/1989b).

Los repertorios contenciosos fueron agrupados en función de su posicionamiento en el espectro que va de la coerción al diálogo: coercitivos (e.g. bloqueo de carreteras y represión violenta), altamente contenciosos (e.g. movilizaciones masivas y arrestos), moderadamente confrontacionales (e.g. confrontaciones públicas y debates técnicos) y dialógicos (mesas de diálogo y procedimientos consultivos). En los dos casos estudiados, en los primeros episodios predominan las tácticas moderadas, pero conforme se intensifica el conflicto se multiplican las tácticas altamente contenciosas y coercitivas, mientras que las tácticas dialógicas muestran una baja frecuencia (ver Tabla 1 y Tabla 2).

Episodio	Dialógica	Neutro	Moderadamente confrontacional	Altamente contenciosa	Coercitiva	Total
Lanzamiento del proyecto y primeras demandas		16	14			30
Rotura del mineroducto y presa de relaves	8	30	110	24	18	190
Primeros bloqueos extensos de carreteras		1	35	3	81	120
Conflicto de Andalgala	13	21	192	163	79	468
Bloqueos coordinados de carreteras	12	7	79	79	246	423
Dispersión del conflicto	17	36	69	184	6	312
Disputas Legales	3	3	73	110		189
Total	53	114	572	563	430	1732

Tabla 1. Catamarca (Argentina): tácticas contenciosas por orientación coercitiva/dialógica, según episodio



Episodio	Dialógica	Neu-tral	Moderada-mente con-frontacional	Altamente conten-ciosa	Coerci-tiva	Total
Lanzamiento del proyecto y primeras demandas	2	3	8	1	1	15
Derrame de mercurio y primeras mesas de diálogo	1		11	2	2	16
Conflicto de Quilish	27	17	55	22	28	149
Conflicto de Combayo y nuevas mesas de diálogo	56	29	80	50	65	280
Inicios del conflicto de Conga	26	12	80	39	23	180
Conflicto de Conga y fracaso de la mesa de diálogo	31	26	189	427	35	708
Post-Conga y conflicto con la familia Chaupe	34	45	283	102	52	516
Total	177	132	706	643	206	1864

Tabla 2. Cajamarca (Perú): tácticas contenciosas por orientación coercitiva/dialógica, según episodio

Estructuras políticas, configuraciones neoliberales y mecanismos disciplinarios

En el plano político, Argentina y Perú tienen trayectorias históricas de alternancia recurrente entre gobiernos autoritarios y democráticos hasta épocas relativamente recientes (Gervasoni, 2011; Klaren, 2005). En ambos países hay un sistema de partidos plural con fragmentación media y polarización relativamente baja (Alcántara, 2004; Mainwaring & Scully, 1995). Sin embargo, este sistema tiene mayor institucionalidad en Argentina (dos agrupaciones políticas fuertemente arraigadas) que en Perú (múltiples agrupaciones con escaso anclaje social). Si bien la administración pública ha promovido procesos de modernización, subsisten prácticas patrimonialistas, clientelistas, hipercentralistas y de corrupción (Romero, 2015; Quiroz, 2013; Cotler, 2013). La subsistencia de estas prácticas fractura los mecanismos de representación y dificulta el establecimiento de plataformas políticas que respondan a los reclamos de los colectivos que resisten las industrias extractivas.

Históricamente, la protesta social en estos países ha planteado reivindicaciones vinculadas con la tenencia de tierras, cuestiones laborales, ajustes estructurales y preocupaciones democráticas. La mayoría de gobiernos han enfrentado este problema mediante la represión, un patrón típico de los gobiernos autoritarios pero recurrente también en los gobiernos democráticos (Romero, 2015; Klaren, 2005). Esto implica que el rápido recurso al aparato represor del Estado está plenamente instalado en el imaginario colectivo, generando desconfianza en los mecanismos institucionalizados de resolución de conflicto.



La configuración del poder político sub-nacional en los dos contextos investigados suele conceder una vasta discrecionalidad a quienes ejercen el gobierno con mínima injerencia de los grupos opositores (Romero, 2015; Christel, 2013; Bazán, 2011; Gervasoni, 2011; Yupari, 2002). El estilo de gobierno suele ser personalista, clientelista y cortoplacista. No obstante, conviene resaltar algunas diferencias entre ambos casos. Mientras en Argentina los gobiernos provinciales tienen competencias sobre la regulación del sector minero, en Perú esa es potestad del gobierno nacional. El fuerte bipartidismo en la provincia de Catamarca ha facilitado el alineamiento de los gobiernos sub-nacionales con la política minera nacional (Christel, 2013; Valiente, 2010/2011; Misoczky & Böhm, 2013; Antonelli, 2010). Distintamente, la volatilidad política en el gobierno regional en Cajamarca ha posibilitado que varias autoridades desafíen abiertamente el modelo extractivista.

En el plano económico, Argentina y Perú iniciaron una transformación neoliberal a inicios de los noventas (Berardi, 2010; Silva, 2009; Mastrangelo, 2004). Esto generó procesos de liberalización, privatización y desregulación de los mercados (Gerchunoff & Torre, 2018; Frechero, 2013; Steger & Roy, 2010; Silva, 2009; Klaren, 2005; Veltmeyer, Petras & Vieux, 1997). En el sector minero, esos cambios dieron lugar a un modelo extractivista basado en condiciones ventajosas para la inversión extranjera, habilitación de recursos energéticos e hídricos, y laxa regulación ambiental (Álvarez Huwiler, Godfrid & Duárez, 2016; Svampa & Antonelli, 2010; De Echave, Diez, Huber, Revesz, Lanata & Tanaka, 2009; Pinto, 2009; Vela Vargas de Eiden, 2006; Prado, 2005). Este “consenso de los *commodities*” (Svampa, 2012) ha mantenido su vigencia hasta la actualidad con mínimas variantes, generando un discurso hegemónico que opaca lecturas críticas y alternativas al modelo extractivista. La ausencia de espacios de mediación agudiza las contradicciones entre las demandas económicas, por un lado, y sociales, culturales y ambientales, por el otro. La incompatibilidad entre estos discursos es un fuerte aliciente para la polarización del conflicto.

El modelo extractivista generó amplias expectativas de crecimiento económico en Catamarca y Cajamarca, territorios con economías deficitarias y altos índices de pobreza (Osatinsky, 2014; Christel, 2013; De Echave & Diez, 2013; Gervasoni, 2011; Bazán, 2011; Valiente, 2011; Valiente, 2010/2011). Lamentablemente, si bien los proyectos mineros han tenido efectos macroeconómicos importantes, las repercusiones locales han sido menores, pues los territorios mantienen su rezago luego de dos décadas de operaciones mineras (Gómez Lende, 2016; Mastrangelo, 2004). El



descrédito asociado con el modelo es un punto medular en la protesta, por cuanto socava la confianza en los actores institucionalizados (el gobierno y las empresas mineras en este caso), haciendo poco fructíferos los procedimientos dialógicos.

Este modelo ha sido impuesto mediante distintos mecanismos disciplinarios. Estos mecanismos establecen un marco normativo y medidas de control para garantizar su cumplimiento efectivo. Esto suele requerir la convergencia entre distintas instancias (normativas, sectoriales, judiciales y de seguridad) y su alineamiento con los intereses corporativos. La mayoría de estos mecanismos es aplicada de manera formal y directa, aunque varios de ellos operan subrepticamente (ver Tabla 3). Estos mecanismos menguan la credibilidad de las agencias públicas como espacios neutrales y refuerzan el recurso de los actores desempoderados a formas disruptivas de protesta con el fin de revertir estos mecanismos disciplinarios.

Actor	Formal	Informal
Agencias públicas	Políticas públicas pro-mineras, represión de la protesta	Criminalización de la protesta, desfinanciamiento de autoridades críticas
Empresas mineras	Denuncias legales	Hostigamiento de la resistencia, espionaje a líderes ambientales

Tabla 3. Mecanismos disciplinarios aplicados en ambos contextos, de acuerdo con su nivel de formalidad

Esquemas de ajuste ambiental y social

Hacia fines de los noventa, la cuestión ambiental adquirió gran relevancia en América Latina en general, y en Argentina y Perú en particular. En ambos países se ha producido una vasta legislación que ha incorporado las demandas ambientales fundamentales, y muchas empresas han adoptado estándares ambientales internacionales (como las normas ISO). Los cuatro proyectos mineros en los cuales se centra esta investigación mantienen esa alineación (Minera Alumbrera, 2018; Minera Yanacocha, 2015; Knight Piésold Consulting, 2010; Minera Agua Rica, 2007). Sin embargo, este desarrollo no ha logrado revertir las asimetrías sectoriales ni ha reducido significativamente los impactos mineros sobre los ecosistemas. Esto ocurre porque la función de control ambiental permanece en manos de la autoridad sectorial (y no de una autoridad independiente), los límites máximos permisibles para descargas son relativamente permisivos, y existe escaso control ambiental directo de los proyectos mineros (Scurrah & Chaparro, 2016; Buzzi, 2015; Catalán & Millones, 2011; Machado, Svampa, Viale, Giraud, Wagner,, Antonelli, Giarraca & Teubal, 2011; De Echave et al., 2009; Li, 2009; Vela Vargas de Eiden, 2006; Defensoría del Pueblo, 2005; World Bank, 2005; Nieva, 2002). La



incapacidad de la autoridad ambiental para defender los derechos de las poblaciones afectadas es un poderoso estímulo para la movilización y protesta social como medios alternos de visibilización y reivindicación de las demandas colectivas.

El tema social también ha adquirido un interés creciente para los gobiernos, máxime en entornos de creciente conflictividad. En Argentina y Perú se han diseñado procedimientos para que las empresas obtengan la “licencia social” de las comunidades aledañas a los proyectos, a menudo mediante audiencias públicas y transparencia informativa. Perú destaca por la dación de una ley que regula los procedimientos de consulta que involucran a las comunidades indígenas. Los gobiernos también han diseñado esquemas para redistribuir los ingresos fiscales hacia los territorios mineros, en ocasiones mediante mecanismos de presupuesto participativo. En Argentina los gobiernos provinciales pueden constituir empresas públicas que coparticipan en los proyectos mineros, mientras que en Perú hay un canon minero que dispone la redistribución del 50% de la tributación minera a los espacios de donde se extraen los recursos minerales. Adicionalmente, se han creado algunos espacios de diálogo y coordinación sectorial. En Argentina se formó la Organización Federal de Estados Mineros y la Mesa de Homologación Minera (Saguié & Peinado, 2016; América Economía, 2012; Cámara Argentina de Empresarios Mineros, 2011), mientras que en Perú se constituyó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (Damonte, 2016). Desafortunadamente, estos procedimientos raramente involucran el consentimiento efectivo de las comunidades involucradas (Robledo & Lumerman, 2009; Mastrangelo, 2004; Nieva, 2002) y tienen limitada capacidad para transformar las relaciones de poder entre los actores involucrados (Red Muqui, 2016; Paredes & De la Puente, 2014; Arana, 2013; Alayza Moncloa, 2007; Vela Vargas de Eiden, 2006). Al no poder afirmar su consentimiento en estos espacios institucionalizados, muchas comunidades no tienen otra opción que recurrir a dinámicas colectivas contenciosas a fin de obtener respuesta a sus reclamos.

Finalmente, las empresas extractivas también han generado múltiples iniciativas de relacionamiento comunitario que incorporan un enfoque dialógico. Esto se ilustra con la diversidad de proyectos participativos de desarrollo territorial (Saguié & Peinado, 2016; Damonte, 2016; Glave & Kuramoto, 2007; Bury, 2003). También se refleja en la adopción de instrumentos internacionales de responsabilidad social corporativa (como el Pacto Global, los Principios de Ecuador, los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas y la



Iniciativa de Reporte Global). Los cuatro proyectos mineros estudiados también reportan esas iniciativas (Minera Alumbrera, 2018; Minera Yanacocha, 2015; Knight Piésold Consulting, 2010; Minera Agua Rica, 2007). No obstante, buena parte de estas iniciativas conllevan un fuerte componente discrecional en las empresas, contribuyen en forma limitada al desarrollo territorial, y a menudo funcionan como mecanismos de control indirecto (Gamu & Dauvergne, 2018; Godfrid, 2017; Yakloveva & Vásquez-Cruz, 2012; Arellano, 2010; Ortiz, 2008).

Las distintas iniciativas ambientales y sociales, diferenciadas en función de su formalidad y obligatoriedad, se aprecian en la Tabla 4:

Actor	Formal		Informal
	Obligatorio	Voluntario	
Empresas mineras	Audiencias públicas sobre estudios de impacto ambiental	Iniciativas de responsabilidad social empresarial, monitoreos ambientales participativos, centros de información a la población	Mesas de diálogo constituidas <i>ad hoc</i>
Agencias públicas sectoriales	Procedimientos de consulta con poblaciones indígenas	Proyectos con presupuestos participativos, oficinas de diálogo y solución de conflictos	Mesas de diálogo constituidas <i>ad hoc</i>

Tabla 4. Iniciativas dialógicas aplicadas en ambos contextos, de acuerdo a su nivel de formalidad y obligatoriedad

Reflexiones finales

En los dos contextos mineros investigados, el análisis pormenorizado de las dinámicas contenciosas revela un claro predominio de las tácticas altamente contenciosas y coercitivas sobre las propiamente dialógicas. Esta prevalencia aumenta conforme se intensifica el conflicto, pero mantiene sus efectos incluso tras su desescalamiento.

Para comprender esta paradoja se examinaron los principales factores contextuales que inciden sobre la evolución de estas dinámicas contenciosas en ambos contextos. El estudio reveló que la forma de implementación de las políticas neoliberales en el sector, la configuración y correlación de fuerzas políticas en los gobiernos sub-nacionales, la imposición de la agenda minera mediante diversos mecanismos disciplinarios, y el limitado alcance de los procedimientos dialógicos ambientales y sociales intensifican la confrontación y desincentivan el diálogo entre las empresas mineras, las agencias públicas y las comunidades locales.

El corolario de esto es que en sectores económicos caracterizados por demandas incompatibles entre los actores involucrados, severos desbalances de poder y débiles mecanismos formales de solución de controversias, esos factores contextuales refuerzan la posición de los grupos poderosos y reducen las posibilidades de acción de



los grupos desempoderados, circunstancia propicia para el recurso a formas disruptivas de protesta.

Notas

¹ PhD. Grupo de Investigación en Filosofía Social. Pontificia Universidad Católica del Perú

² Este estudio formó parte de una investigación doctoral en la New School for Social Research.

Referencias bibliográficas

Alao, Abiodun. 2007. *Natural Resources and Conflict in Africa. The Tragedy of Endowment*. Rochester, NY: University of Rochester Press.

Alayza Moncloa, Alejandra. 2007. *No pero sí. Comunidades y minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú*. Lima: CooperAcción & Oxfam.

Alayza, Alejandra, y Eduardo Gudynas. 2012. "Sociedad civil y transiciones al postextractivismo: ensayos, dinámicas y lecciones". En *Anales Seminario Internacional Desarrollo territorial y extractivismo: luchas y alternativas en la region andina*, editado por Nicoletta Velardi y Marco Zeisser Polatsik, 235-264. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, CooperAcción y GRET.

Alcántara Sáez, Manuel. 2004. "Partidos políticos en América Latina: precisiones conceptuales, estado actual y retos futuros". *Revista de Estudios Políticos* 124 (Abril-June): 55-94.

Álvarez Huwiler, Laura, Julieta Godfrid, y Jorge Duárez. 2016. "Expansión minera y protesta social en Argentina y Perú". *Investigaciones sociales* 19, no. 35: 169-186.

América Economía. 2012. "Argentina conforma la Organización Federal de Estados Mineros". *América Economía*. Febrero 16, 2012. < <https://bit.ly/3nioXp4>>.

Antonelli, Mirta Alejandra. 2010. "Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la 'minería responsable y el desarrollo sustentable'". En *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, editado por Maristella Svampa y Mirta A. Antonelli, 2nd ed., 51-101. Buenos Aires: Biblos.

Arana Zegarra, Marco. 2013. "Sistematización de la mesa de diálogo, desarrollo y estrategias de resistencia y negociación del caso Minas Conga, Cajamarca". GRUFIDES, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ingeniería Sin Fronteras. Acceso Diciembre 11, 2016. < <https://bit.ly/398GURO>>.



- Arce, Moisés. 2015. "Protest and Social Movements in Peru". En *Handbook of Social Movements across Latin America*, editado por Paul Almeida y Allen Cordero Ulate, 275-289. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer.
- Arellano Yanguas, Javier. 2010. "Local Politics, Conflict, and Development in Peruvian Mining Regions". Tesis de doctorado, University of Sussex.
- Banks, Glenn. 2002. "Mining and the Environment in Melanesia: Contemporary Debates Reviewed". *The Contemporary Pacific* 14, no. 1 (Spring): 39-67. DOI: 10.1353/cp.2002.0002
- Bazán, Armando Raúl. 2011. *El noroeste y la Argentina contemporánea (1853-1992)*. Catamarca: Editorial Sarquís.
- Bebbington, Anthony, Denise Bebbington, Jeffrey Bury, Jeannet Lingán, Juan Pablo Muñoz, y Martin Scurrah. 2008. "Mining and Social Movements: Struggles over Livelihood and Rural Territorial Development in the Andes". *World Development* 36, no. 12: 2888-2905.
- Bebbington, Anthony, Leonith Hinojosa, Denise Humphreys Bebbington, Maria Luisa Burneo, y Ximena Warnaars. 2008. "Contention and Ambiguity: Mining and the Possibilities of Development". *Development and Change* 39, no. 6: 965-992.
- Bennet, George. 2010. "Process Tracing and Causal Inference". En *Rethinking Social Inquiry. Diverse Tools, Shared Standards*, editado por Henry E. Brady y David Collier. Segunda edición. 207-219. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Berardi, Ana Laura. 2010. "Minería metálica en el noroeste argentino. Reconfiguraciones territoriales y conflictos". Artículo presentado en III Jornadas del Doctorado en Geografía. Desafíos Teóricos y Compromiso Social en la Argentina de Hoy, La Plata, Setiembre 2010.
- Biekart, Kees. 2005. "Seven Theses on Latin American Social Movements and Political Change". *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 79: 85-94.
- Bury, Jeffrey. 2003. "Marcos de análisis y metodologías para evaluar a las empresas socialmente responsables: un estudio de caso de la Minera Yanacocha". En *De la caridad a la solidaridad: filantropía y voluntariado en el Perú*, editado por Felipe Portocarrero y Cynthia Sanborn, 385-423. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
- Buzzi, Elisa. 2015. *El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE): balance y perspectivas*. Lima: CooperAcción.
- Calderón, Fernando, coord. 2012. *La Protesta Social en América Latina*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.



- Cámara Argentina de Empresarios Mineros. 2011. "Minería: sustitución y homologación". 2003. Acceso Octubre 30, 2018. < <https://bit.ly/3pRxINV>>.
- Castro Soto, Gustavo. 2005. "El movimiento social en Mesoamérica por la defensa de los recursos naturales". *OSAL VI*, no. 17 (Mayo-Agosto): 41-51.
- Catalán, Pedro Herrera, y Oscar Millones Destéfano. 2011. "¿Cuál es el costo de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos en el Perú? Informe final". Lima: CIES y Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://cies.org.pe/es/articulo/cual-es-el-coste-de-la-contaminacion-ambiental-minera-sobre-los-recursos-hidricos-en-el>
- Christel, Lucas Gabriel. 2013. "Incidencia de las resistencias sociales en las legislaciones mineras provinciales. Los casos de Córdoba y Catamarca (2003-2008)". *Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales* 14: 5-26.
- Cotler, Julio. 2013. *Clases, estado y nación en el Perú*. Nueva edición. Lima: IEP.
- Damonte, Gerardo. 2012. *From Expropriation to Social License: Accessing Land for Extractive Industries*. Policy Brief. Lima: ELLA Practical Action Consulting.
- Damonte, Gerardo, y Manuel Glave. 2012. *Latin American Approaches to Extractive Industry Conflicts. Policy Brief*. Lima: ELLA Practical Action Consulting.
- Damonte, Gerardo. 2016. "Minería, Estado y comunidades: cambios institucionales en el ultimo ciclo de expansión extractiva en el Perú. Un balance de investigación". En *Investigación para el desarrollo en el Perú. Once balances*, editado por GRADE, 403-444. Lima: GRADE.
- De Echave, José, Alejandro Diez, Ludwig Huber, Bruno Revesz, Xavier Ricard Lanata, y Martín Tanaka. 2009. *Minería y Conflicto Social*. Lima: CBC, CIPCA, CIES y IEP.
- De Echave, José, y Alejandro Diez. 2013. *Más Allá de Conga*. Lima: CooperAcción.
- Defensoría del Pueblo. 2005. "Minería, desarrollo sostenible, y derechos ciudadanos. Una aproximación inicial desde la Defensoría del Pueblo". Working paper. Defensoría del Pueblo, Julio.
- Della Porta, Donatella, y Mario Diani. 2006. *Social Movements. An Introduction*. Segunda edición. Malden, MA, Oxford y Carlton: Blackwell Publishing.
- Franklin, James C. 2015. "Repertoires of Contention and Tactical Choice in Latin America, 1981–1995". *Advances in the Visual Analysis of Social Movements* 35: 175-208. Emerald Insight.
- Frechero, Jorge Ignacio. 2013. "Extractivismo en la economía argentina. Categorías, etapas históricas y presente". *Estudios críticos del desarrollo* III, no. 4: 45-82.



- Gamu, Jonathan Kishen, y Peter Dauvergne. 2018. "The Slow Violence of Corporate Social Responsibility: The Case of Mining in Peru". *Third World Quarterly* 39, no. 5: 959-975
- George, Alexander, y Andrew Bennett. 2005. "Process Tracing and Historical Explanation". En *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*, editado por Alexander George y Andrew Bennet, 205-232. Cambridge: MIT Press.
- Gerchunoff, Pablo, y Juan Carlos Torre. 2018. "Argentina: The Politics of Economic Liberalization". En *The Changing Role of the State in Latin America*, editado por Menno Vellinga, 115-148. New York: Routledge.
- Gerring, John. 2004. "What Is a Case Study and What Is It Good for?" *American Political Science Review* 98, no. 2: 341-354.
- Gerring, John. 2006. *Case Study Research. Principles and Practices*. New York: Cambridge University Press.
- Gervasoni, Carlos. 2011. "Democracia, autoritarismo e hibridez en las provincias argentinas: la medición y causas de los regímenes sub-nacionales". *Journal of Democracy en Español* 3: 75-93.
- Glave, Manuel. 2012. *Mining in Latin America: Attracting Quantity and Quality in FDI. Policy Brief*. Lima: ELLA Practical Action Consulting.
- Glave, Manuel, y Juana Kuramoto. 2007. "La minería peruana: lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber". En *Investigación, políticas y desarrollo en el Perú*, editado por GRADE, 135-181. Lima: GRADE.
- Godfrid, Julieta. 2017. "Procesos de reconfiguración territorial rural a partir de la implementación de megaproyectos mineros. El caso de La Alumbra en Argentina". *Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad* 3, no. 10 (Enero): 45-69.
- Gómez Lende, Sebastián. 2016. "Psicoesfera y minería metalífera en la Argentina: el mito de la creación de empleo en las provincias de Catamarca y San Juan". *Geografía* 25, no.1 (Enero): 143-164.
- Habermas, Jürgen. 1981/1989. *The Theory of Communicative Action. Volume Two: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Boston: Beacon Press.
- Hardt, Michael, y Antonio Negri. 2009. *Commonwealth*. Cambridge: Harvard University Press.
- Harvey, David. 2003. *The New Imperialism*. Oxford y New York: Oxford University Press.
- Harvey, David. *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: AKAL, 2007.



- Haslam, Paul Alexander, y Nasser Ary Tanimoune. 2016. "The Determinants of Social Conflict in the Latin American Mining Sector: New Evidence with Quantitative Data". *World Development* 78: 401–419. Elsevier.
- Kemp, Deanna, John R. Owen, y Shashi van de Graaff. 2012. "Corporate social responsibility, mining and 'audit culture'". *Journal of Cleaner Production* 24: 1-10. Elsevier.
- Klaren, Peter F. 2005. *Nación y sociedad en la historia del Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
- Knight Piésold Consulting. 2010. "Minera Yanacocha S.R.L. Proyecto Conga. Estudio de Impacto Ambiental. Resumen Ejecutivo". Lima: Knight Piésold Consulting.
- Laclau, Ernesto. 1985. "New Social Movements and the Plurality of the Social". En *New Social Movements and the State in Latin America*, editado por David Slater, 27-42. Amsterdam: CEDLA.
- Li, Fabiana. 2009. "Documenting Accountability: Environmental Impact Assessment in a Peruvian Mining Project". *Political and Legal Anthropology Review* 32, no. 2: 218–236.
- Lijphart, Arend. 1971. "Comparative Politics and the Comparative Method". *The American Political Science Review* 65, no. 3 (Septiembre): 682-693.
- Liverman, Diana, y Silvina Vilas. 2006. "Neoliberalism and the Environment in Latin America". *Annual Review of Environmental Resources* 31: 327–363.
- Machado, Horario, Maristella Svampa, Enrique Viale, Marcelo Giraud, Lucrecia Wagner, Mirta Antonelli, Norma Giarracca, y Miguel Teubal. 2011. *15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero*. Buenos Aires: Colectivo Voces de Alerta.
- Mainwaring, Scott, y Timothy R. Scully. 1995. "La institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina". *Revista de Ciencia Política* XVII, no. 1-2: 63-101.
- Mastrangelo, Andrea. 2004. "'Con dos minas de oro, Belén no tiene caminos'. (Una interpretación ideológica de las investigaciones financiadas por el Banco Mundial)". Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Misiones.
- McAdam, Doug, John McCarthy, y Mayer Zald. 1996. "Introduction: Opportunities, Mobilizing Structures y Framing Processes – Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements". En *Comparative Perspectives on Social Movements*, editado por Doug McAdam, John McCarthy y Mayer Zald, 1-20. New York: Cambridge University Press.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, y Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.



Melucci, Alberto. 1985. "The Symbolic Challenge of Contemporary Movements". *Social Research* 52, no. 4 (Winter): 789-816.

Minera Agua Rica. 2007. Proyecto Agua Rica. "Informe de Impacto Ambiental. Resumen Ejecutivo". Rescan Ingenieros y Científicos. Acceso Noviembre 18, 2016. <<https://bit.ly/2Mu84eg>>.

Minera Alumbra. 2018. "Marco de gestión". Acceso Octubre 23, 2018. <http://www.alumbra.com.ar/desarrollo-sostenible/enfoque/marco-de-gestion/>

Minera Yanacocha. 2015. "Reporte de sostenibilidad 2015". Acceso Febrero 22, 2017. <http://www.yanacocha.com/wp-content/uploads/2010/04/Yanacocha-GRI-2015.pdf>

Misoczky, Maria Ceci, y Steffen Böhm. 2013. "Resisting Neocolonial Development: Andalgalá's People Struggle against Mega-Mining Projects". *Cadernos EBAPE.BR* 11, no. 2 (Junio): 311-339.

Nieva, Héctor Óscar. 2002. "Variación de parámetros geoquímicos, río VisVis, Catamarca, Argentina, causas y consecuencias". Tesis de maestría, École Nationale Supérieure des Mines de Nancy.

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). 2019. "Conflictos mineros en América Latina". Acceso Febrero 20, 2019. <<https://bit.ly/3omEkOK>>.

Offe, Claus. 1985. "New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics". *Social Research* 52, no. 4 (Winter): 817-868.

Ortiz, Ricardo. 2008. "Las empresas transnacionales en la minería argentina: seguridad jurídica para las empresas, inseguridad ambiental e incumplimiento de los derechos para las comunidades locales". Programa de Vigilancia Social de las Empresas Transnacionales. Research paper 3. Acceso Diciembre 14, 2014. <<https://bit.ly/3oi3wG5>>.

Osatinsky, Ariel. 2014. "Transformaciones económicas y deterioro social en Catamarca entre fines del siglo XIX y el siglo XXI: de la marginalidad a la inserción en el mercado mundial". Artículo presentado en III Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y Mercados de Trabajo, San Salvador de Jujuy, Setiembre 4-5, 2014.

Paredes, Maritza, y Lorena de la Puente. 2014. "Protestas y negociaciones socioambientales. El caso de las industrias extractivas". En *Agenda de investigación en temas socioambientales en el Perú: una aproximación desde las ciencias sociales*, editado por Gerardo Damonte y Gisselle Vila, 75-105. Lima: CISEPA – PUCP.

Pennings, Paul, Hans Keman, y Jan Kleinnijenhuis 2006. *Doing Research in Political Science. An Introduction to Comparative Methods and Statistics*. London: Sage Publication.



- Pinto, Vladimir. 2009. "Reestructuración neoliberal del estado peruano, industrias extractivas y derechos sobre el territorio". En *Minería y territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*, coordinado por José de Echave C., Raphael Hoetmer y Mario Palacios Panéz, 85-103. Lima: CooperAcción.
- Prado, Óscar A. 2005. *Situación y perspectivas de la minería metálica en Argentina*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Przeworski, Adam, y Henry Teune. 1970. *The Logic of Comparative Social Inquiry*. New York: Wiley-Interscience.
- Quiroz, Horacio. 2013. *Historia de la corrupción*. Lima: IEP e IDL.
- Red Muqui. 2016. *Balance y propuestas para el funcionamiento de los procesos de diálogo en el Perú*. Lima: Red Muqui, Oxfam América.
- Reed, Darryl. 2002. "Resource Extraction Industries in Developing Countries". *Journal of Business Ethics* 39: 199-226.
- Robledo, Juliana, y Pablo Lumerman. 2009. "Análisis de la conflictividad socioambiental en Argentina". En *Informe ambiental anual 2009*, editado por María Eugenia Di Paola, Federico Sangalli y Silvina Caorsi, 79-105. Buenos Aires: Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
- Rodríguez Carmona, Antonio, y Miguel Castro. 2013. "Los imaginarios que sostienen la expansión minera en los Andes". En *Minería y movimientos sociales en el Perú. Instrumentos y propuestas para la defensa de la vida, el agua y los territorios*, editado por Raphael Hoetmer, Miguel Castro, Mar Daza, José De Echave C. y Clara Ruiz, 31-46. Lima: Programa Democracia y Transformación Global, CooperAcción, AcSur Las Segovias y EntrePueblos.
- Romero, Luis Alberto. 2015. *Breve historia contemporánea de la Argentina. 1916-2010*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Saade Hazin, Miryam. 2013. *Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México y el Perú*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Saguier, Marcelo, y Guillermo Peinado. 2016. "Canadian Mining Investments in Argentina and the Construction of a Mining–Development Nexus". *Latin American Policy* 7, no. 2: 267-287. Acceso Octubre 23 2018. <<https://bit.ly/3noUQwo>>.
- Sánchez Albavera, Fernando, Georgina Ortiz, y Nicole Moussa. 2001. *Mining in Latin America in the late 1990s*. Santiago de Chile: Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
- Scurrah, Martin, y Anahí Chaparro. 2016. "Industrias extractivas, gobernanza ambiental e innovación institucional en el Perú". En *Gobernanza local, pueblos indígenas e*



industrias extractivas. Transformaciones y continuidades en América Latina, coordinado por Darío Restrepo, Liliana Soler-Gómez Lutzelschwab, Eduardo Toche y Molvina Zeballos, 129-140. Ginebra: Société Suisse des Américanistes.

Silva, Eduardo. 2012. "Exchange Rising? Karl Polanyi and Contentious Politics in Contemporary Latin America". *Latin American Politics and Society* 54, no. 3: 1-32.

Stake, Robert E. 1994. "Case Studies". En *Handbook of Qualitative Research*, editado por Norman K. Denzin y Yvonna S. Lincoln, 236-247. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Steger, Manfred N. y Ravi K. Roy. 2010. *Neoliberalism. A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.

Svampa, Maristella, y Enrique Viale. 2014. *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz Editores.

Svampa, Maristella, y Mirta Alejandra Antonelli. 2010. "Hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto". En *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, editado por Maristella Svampa y Mirta A. Antonelli, 2nd ed., 15-27. Buenos Aires: Biblos.

Svampa, Maristella. 2012. "Consenso de los Commodities, Giro Ecoterritorial y Pensamiento Crítico en América Latina". *Observatorio Social de América Latina* XIII, no. 32: 15-38.

Tilly, Charles. 2005. "Repression, Mobilization and Explanation". En *Repression and Mobilization*, editado por Christian Davenport, Hank Johnston y Carol Mueller, 211-226. Minneapolis y London: University of Minnesota Press.

Touraine, Alain. 2006. "Los movimientos sociales". *Revista Colombiana de Sociología* 27: 255-278.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2007. *World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development*. New York y Geneva: United Nations.

United Nations. 2012. *Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resources Conflict. Extractive Industries and Conflict*. New York: United Nations y European Union.

Valiente, Silvia. 2010/2011. "Prácticas territoriales vinculadas a la mega-minería en Catamarca y un proyecto territorial". *Breves Contribuciones del I.E.G.* 22: 9-30.

Valiente, Silvia. 2011. "Dinámica socio-económica y territorial de la provincial de Catamarca en la década del 90. Impacto socio-ambiental de Proyectos de Gran Escala



(PGE): Bajo de la Alumbreira sobre Santa María”. Tesis de doctorado, Universidad Nacional de la Plata.

Vela Vargas de Eiden, Talia Larisa. 2006. “Environmental Policy under Political Transition: The Peruvian Mining Sector and the Yanacocha Goldmine”. Tesis de doctorado, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Veltmeyer, Henry, James Petras, y Steve Vieux. 1997. *Neoliberalism and Class Conflict in Latin America. A Comparative Perspective on the Political Economy of Structural Adjustment*. New York: St. Martin’s Press, Inc.

Wasserman, Claudia. 2017. “Social Movements in Latin America: From the Nineteenth to the Twenty-First Century”. En *The History of Social Movements in Global Perspective. A Survey*, editado por Stefan Berger y Holger Nehring, 115-143. Bochum y Stirling: Palgrave Macmillan.

World Bank. 2005. “Republic of Peru. Wealth and Sustainability: The Environmental and Social Dimensions of the Mining Sector in Peru”. Report. World Bank. Acceso Noviembre 25, 2016. < <https://bit.ly/3oiqooP>>.

Yakloveva, Natalia, y Diego Vásquez-Cruz. 2012. “Stakeholder Perspectives on CSR of Mining MNCs in Argentina”. *Journal of Business Ethics* 106: 191-211.

Yin, Robert K. 2008. *Case Study Research: Design and Methods*. Cuarta edición. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Yupari, Anida. 2002. “Cajamarca y la incidencia de Minera Yanacocha. Marco para el Desarrollo Sostenible”. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Acceso Diciembre 2, 2016. <http://cajamarca.de/mine/UNCTAD-2002.pdf>

Žižek, Slavoj. 2009. *First as Tragedy, Then as Farce*. London y New York: Verso.



Comunalidad y territorio: Otra mirada sobre la acción colectiva.

Giovanna Mazzotti Pabello

Resumen

En esta ponencia se presenta una perspectiva que aporta al debate teórico y epistemológico sobre los términos con los que contamos para definir, categorizar y analizar los procesos o fenómenos que en las ciencias sociales se designan como acción colectiva y movimientos sociales que se fundan en el presupuesto del individuo y la ciudadanía, para empezar a reconocerlos como expresiones de las organizaciones comunitarias y de colectivos sociales que se definen a partir de los diferentes modos de hacer con otros para recuperar o defender los ámbitos de comunidad y el territorio - concebido como habitat y comunidad de vida (Svampa, 2010)- los cuales, a diferencia de la perspectiva individualista y acumulativa permiten ordenar la cooperación y fomentar relaciones de comunidad para llevar una vida con autonomía (Bonfil, 2003). Partimos del punto de vista del que nos provee el giro decolonial para poner en entredicho el carácter de universalidad, objetividad y neutralidad –como un imaginario punto cero (Castro-Gómez, 2010)- que se atribuye al conocimiento calificado como científico, para situarlo en el espacio histórico geocultural y político de la modernidad eurocentrada. Buscamos indicar la radical novedad de las distintas modalidades organizativas cuya inmensa riqueza excede el término genérico de la acción colectiva que irrumpen desde la exterioridad alternativa de la modernidad asumiendo los desafíos que les impone respondiendo desde el lugar de sus propias experiencias culturales (Dussel, 2005) y proponemos explorar la noción de comunalidad (Díaz 2007, Martínez Luna 2002) para mirar desde otro horizonte epistemológico las la acción colectiva.

Palabras clave

Acción colectiva; Individuo; Modernidad; Territorio; Comunalidad.

Introducción

A fin de aportar al debate teórico y epistemológico cuestionando los términos con los que contamos para definir, categorizar y analizar los procesos o fenómenos que en las ciencias sociales se designan como acción colectiva y movimientos sociales, iniciaremos con una breve reseña de las distintas escuelas y corrientes de pensamiento que han determinado el estudio y el análisis de los movimientos sociales. Pese a que las clasificaciones que aquí se presentan no agotan la gran diversidad de estudios y



perspectivas, si nos permite vislumbrar un panorama de los puntos de partida analíticos con los que se ha abordado en las últimas décadas los movimientos sociales y las movilizaciones ocurridas en el mundo.

Para Mamani (s/f) el tema de los movimientos sociales se analiza desde la psicología de masas en los años 1960, mientras que en los 1970 se cuestiona este enfoque para plantear la movilización de recursos y el de la oportunidades políticas, y más adelante, entre 1970 y 1975 surge la propuesta de análisis de las identidades. De manera más detallada, Quiroga (2013 p.p 25-44) expone que la acción colectiva, analizada por la escuela de la interacción norteamericana se distingue en dos grandes líneas de estudio: la teoría de la movilización de recursos que se avoca al estudio de los recursos organizativos y a las capacidades y motivaciones de los líderes y activistas. Y la teoría de la movilización política, que centra su atención en las oportunidades y cambios políticos que rodean a la acción colectiva (Tilly 1978 y 2000, McAdam 1982 y 1999, Tarrow 1998). Para esta autora, existen también otras líneas interpretativas al interior del enfoque norteamericano, que prestan mayor atención a los marcos culturales o identitarios de la movilización social (Obershall 1993, Gamson 1992, Snow 1986) En esencia, Quiroga remarca que esta gran diversidad de expresiones da cuenta de la evolución de la perspectiva norteamericana desde “pensar al actor como hiper racional (estratégico) hasta tomar en cuenta sus capacidades y competencias, acercándolo a la idea de actor interpretativo”. (p. 29)

En el caso del enfoque europeo los enfoques con los que se analiza la identidad colectiva se distinguen genéricamente con base en grandes corrientes de análisis en torno a las cuales, según Quiroga (2013 p 31)

se percibe un consenso generalizado entre los diferentes autores sobre el protagonismo de nuevos actores que se movilizaban al margen de organizaciones políticas y sindicales. De allí que se establecía una diferenciación muy importante con la acción colectiva de la sociedad industrial desarrollada fundamentalmente por la clase obrera.

Entre las corrientes de análisis se encuentran: el accionalismo más socio-cultural de los nuevos movimientos sociales que va más allá de una lucha de intereses y pone en tela de juicio un sistema de poder propuesto por Alain Touraine (1990, 1997, 2003); de las expresiones cercanas a la psicología social en el terreno de la producción simbólica al interior de la vida cotidiana, que implica el desarrollo de una identidad colectiva (Melucci 1980, 1994) y la versión neomarxista de Claus Offe (1988) que considera al movimiento social como explicitación de un conflicto social, en esta corriente se distinguen a



aquellos teóricos vinculados a los movimientos sociales urbanos y con carácter histórico estructural.

En esta misma dirección en la síntesis que propone Candón Mena (2012) afirma la “teoría de la movilización de recursos” (TMR) y los “nuevos movimientos sociales” (NMS) son los principales referentes teóricos para en análisis de la acción colectiva, y lo explica del siguiente modo: “Mientras la primera explica los movimientos más pragmáticos y las organizaciones más profesionalizadas en el contexto de los EE.UU., la segunda se centra en los aspectos culturales y en la influencia del Estado del bienestar propia del contexto europeo” (s/n).

Sin pretender agotar el tema, ni reducir la profunda y prolífica discusión que ha tenido lugar desde la década de los 60 en torno a los movimientos sociales nos basaremos en esta categorización a fin de avanzar en la propuesta de esta ponencia que, tal como señalamos al principio, como siguiente paso centraremos la crítica situándonos en el punto de vista decolonial “en contravía de las grandes narrativas modernistas –la cristiandad, el liberalismo y el marxismo— [...] hacia la posibilidad de modos de pensamiento no-eurocéntricos.” (Escobar, 2003, p. 54).

Planteamiento

Basándonos en dos aspectos que consideramos centrales de la colonialidad epistémica de modernidad-colonial posibilitadas en primer lugar por la hybris del punto cero (Castro-Gómez 2005) y que subyacen en el análisis de los movimientos sociales y en la teoría de la acción colectiva al portar la abstracción universalizadora del espacio, el tiempo y la temporalidad impuesta por el modelo de pensamiento de la modernidad, a partir del punto cero imaginario como el fulcro -o punto de apoyo- del eurocentrismo taxativo de la modernidad.

El segundo aspecto de la colonialidad epistémica al que nos referiremos es el de la monocultura racional (de Sousa Santos 2006), que al decir del autor debe entenderse como la combinación de al menos cinco lógicas o modos de producción de no existencia de la otredad. En síntesis la primera lógica de las que habla, es la que deriva de la monocultura del saber y del rigor del saber científico y consiste en la transformación de la ciencia moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y de calidad estética. La segunda, se basa en la monocultura del tiempo lineal, es la idea según la cual la historia tiene sentido y dirección únicos, formulados de diversas formas: progreso, revolución, modernización, desarrollo, etc. La tercera corresponde a la clasificación social que se asienta en la monocultura de la naturalización de las



diferencias (género-raza); la cuarta es la lógica de la escala dominante que se adjudica precedencia sobre todas las otras realidades que son consideradas particulares o vernáculas y locales y aparece bajo dos formas principales: lo universal y lo global. Y por último, está la lógica productivista que se asienta en la monocultura de los criterios de crecimiento económico y productividad capitalista que aparece como un objetivo racional incuestionable la productividad (de Sousa Santos, 2006, p.p., 90-92).

Como hemos dicho, con fines de análisis en esta ponencia retomamos las ideas propuestas por los autores citados (Castro-Gómez 2005 y de Sousa Santos 2006) para plantear una discrepancia inicial que convierte a la teoría de la movilización de recursos y de la acción colectiva utilizada en la teoría de los nuevos movimientos sociales en “un conjunto de teorías ciegas, que vuelven la práctica social invisible” (de Sousa-Santos, 2006: 16).

Por un lado nos referimos a la existencia de una monocultura de la elección racional que es inherente al individualismo metodológico y a la teoría de la movilización de los recursos (Tanaka, 1995) presente en la escuela norteamericana y francófona de la acción colectiva. La cual, si bien forma parte de la quinta lógica propuesta por de Sousa Santos (2010) la lógica productivista, al ser analizada desde el individualismo metodológico y la teoría elección racional como principio explicativo –universalizado, transversalizado y naturalizado- del comportamiento, nos permite señalar la activa producción en lo que respecta a universos epistémicos que han sido negados e invisibilizados por la modernidad y que, sostenemos, son el fundamento de “los otros modos de hacer con otros” (Zibechi, 2015) que no pueden ni deben ser reducidos ni constreñidos al horizonte de visibilidad que les invisibiliza de la modernidad-colonial.

Y por el otro lado, referiremos a la existencia de la monocultura del tiempo lineal y de escala global que presupone el consenso de la emergencia de los nuevos movimientos sociales en el marco del paso de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial (Quiroga, 2013), con tal interpretación se impone la contextualidad histórica que se define desde la pre-existencia de una sociedad industrial a una sociedad post-industrial de la que frente a “los actores <<tradicionales>>, obreros y campesinos: aparecían en escena los pobladores, las mujeres, los jóvenes, los movimientos regionales y otros, todos ellos <<nuevos>> actores sin una ubicación clara según la lógica de las estructuras” (Tanaka 1995: 221). Razón por la cual, según el autor, la reflexión fue desplazándose hacia los procesos de construcción de sus identidades.



Lo que nos interesa destacar aquí, al reconocer esta retórica de la modernidad y situarla como un producto cultural e histórico basado en una matriz de poder compleja cimentada en la colonialidad epistémica de la monocultura racional es trascender el ámbito del pensamiento crítico generado desde la modernidad hacia la propia modernidad (como el oroborus histórico que se muerde su propia cola) para avanzar en la construcción desde otro horizonte de visibilidad no (post) moderno-colonial, sino transmoderno para facilitar la comprensión de la pluralidad de otros modos de hacer con otros “que están transformando su resistencia al desarrollo y a las formas económicas de vida en un empeño de liberación, que los lleva a reivindicar y regenerar sus ámbitos de comunidad o a crear otros nuevos” (Esteva, 2016: 18) y que no pueden ni deben ser tratados como una otredad residual, como reminiscencias, “estadios anteriores” o evoluciones particulares de una (post) modernidad que se representa a sí misma como camino único y finalidad irrevocable. De ahí afirmamos la pertinencia de enunciar y comprender desde la transmodernidad en el sentido que Dussel (2005) lo propone:

... el concepto estricto de “trans-moderno” quiere indicar esa radical novedad que significa la irrupción, como desde la Nada, desde la Exterioridad alternativa de lo siempre Distinto, de culturas universales en proceso de desarrollo, que asumen los desafíos de la Modernidad, y aún de la Post-modernidad europeo-norteamericana, pero que responden desde otro lugar, other location. Desde el lugar de sus propias experiencias culturales, distinta a la europeo-norteamericana, y por ello con capacidad de responder con soluciones absolutamente imposibles para la sola cultura moderna (Dussel, 2005, citado en Ahumada Infante 2013.).

La finalidad es indicar, tal como menciona el autor, la radical novedad de las distintas expresiones organizativas y de movilización cuya inmensa riqueza excede el término genérico de la acción colectiva que irrumpen *desde la exterioridad alternativa de la modernidad asumiendo los desafíos que les impone y respondiendo desde el lugar de sus propias experiencias culturales* (Dussel, 2005). De ahí que nos proponemos explorar la noción de comunalidad (Díaz 2007, Martínez Luna 2002) y la noción de episteme indígena de Rivera Cusicanqui y la referencia de Svampa (2008) a movimientos territoriales para mirar desde otro horizonte epistemológico la acción colectiva. De cara a ello nos sumamos al proyecto descolonial que propone Dussel (2009) recuperando el pensamiento crítico de tradiciones epistémicas basadas en experiencias culturales que contravienen las lógicas de la monocultura racional propias de la organización moderna.

Y lo hacemos así como latinoamericanos comprometidos con “Aquellos que luchan por la preservación de la biosfera y aquellos que rechazando un estilo de vida caracterizado



por el monopolio de mercancías sobre las actividades intentan recobrar poco a poco la capacidad de vivir fuera del régimen mercantil de la escasez, convergen en una alianza nueva en el seno de la cual todas las corrientes tienden a la recuperación y aumento de los ámbitos de comunidad” (Esteva, 2016 p. 20)

Propuesta: Territorio y comunalidad, fragmentos para otra mirada de la acción colectiva

El rol evidente el intelectual radical es precisamente ese: observar a aquellos que están creando alternativas viables, intentar anticipar cuáles pueden ser las enormes implicaciones de lo que (ya) se está haciendo, y devolver esas ideas no como prescripciones, sino como contribuciones, posibilidades, como regalos. (Graeber 2011 p.p 18-19)

Con base en el planteamiento que presentamos, esta propuesta se enmarca en la idea de transmodernidad propuesta por Dussel (2005 citado en Ahumada Infante 2013.) que, en el concepto estricto indica la radical novedad que significa la irrupción, como desde la Nada, desde la Exterioridad alternativa de lo siempre Distinto, de culturas universales, que asumen los desafíos de la Modernidad, pero que responden desde otro lugar, other location. Desde el lugar de sus propias experiencias culturales, distinta a la europeo-norteamericana, y por ello con capacidad de responder con soluciones absolutamente imposibles para la sola cultura moderna” (Dussel, 2005,). Para mirar desde otro lugar – y otra cosa distinta- lo que la corriente europea atribuye a los “nuevos movimientos sociales” y salir del horizonte explicativo funcionalista/marxista. En efecto, considerar tal irrupción como desde la nada pero, desde la exterioridad alternativa de lo siempre distinto propio *de las experiencias de culturas universales* que perviven, se recrean y subsisten en presencia, adaptación y conflicto con la modernidad, nos permite reconocer desde los diferentes proyectos políticos-epistémicos que existen hoy en el mundo un pluriverso de expresiones de modos de hacer con otros desde la exterioridad alternativa de la monocultura racional.

No se trata de considerar, por tanto, el surgimiento de “nuevos actores sociales” que emergen en el tránsito de las rupturas en el paso de una sociedad industrial a una postindustrial, sino de “Tomar los relámpagos insurreccionales como momentos epistemológicos [...] para poder conocer aquello que se esconde detrás y debajo de las formas establecidas” (Zibechi 2006 p. 33) y de este modo considerar “Las diferentes movilizaciones que se multiplican hoy en América Latina, al compás de la explosión de los conflictos socioambientales que poseen una dinámica organizacional y



confrontacional propia con capacidad para sostener sus demandas en el tiempo”, (Svampa 2008: 10).

En la búsqueda por comprender eso que *se esconde detrás y debajo* –por utilizar la metáfora espacial de Zibechi- del momento insurreccional, no desde la jaula epistémica que impone la monocultura de la elección racional y esa definición de acción colectiva, sino desde los diferentes proyectos epistémicos y políticos -que se hacen visibles en el espacio tiempo de la movilización- y que, de acuerdo con Zibechi (2006) muestran su interioridad y develan los aspectos ocultos de la sociabilidad que se basa <<en la organización tradicional de parentesco y territorialidad>> (p. 17). Recuperamos la propuesta Floriberto Díaz y de Jaime Martínez Luna quienes, tal como lo afirma Arturo Guerrero (2015) crearon por separado la perspectiva de la “comunalidad” y retomamos el planteamiento de Silvia Rivera Cusicanqui (Ecuador to the World 10, nov. 2016) sobre la existencia de *otra episteme*, -episteme indígena- comprendida como otra atmósfera cognitiva que reconoce sujetos en el mundo no humano, en la que existe una relación entre la mano y el cerebro que emana del sembrar, cosechar y de hacer rituales de la que emana Otra relación con los alimentos, y en la que la comunidad es un entorno epistémico de conocimiento en grupo, de procesos de conocer y hacer, de saber hacer con otros.

En esa dirección, vale la pena señalar brevemente los componentes analíticos del término de la acción colectiva concebido desde la monocultura racional que, tanto en la perspectiva interaccionista como en la funcionalista se desarrolla en el marco del debate entre la visión de la función-disfunción social del comportamiento colectivo y las ideas acerca de los procesos que tienden a una transformación de las bases del sistema. Y comprender, en ese contexto, hasta que punto la monocultura de la teoría de la elección racional determina la reflexión y la comprensión de la acción colectiva al ser entendida como una respuesta reactiva ante las crisis y transformaciones sociales y/o ante las normas y valores, en el marco del pensamiento binario individuo-colectividad. Así, en la teoría de la movilización de recursos (Jenkins 1983, Obershall 1987, Tilly 1978) que parte del análisis de las organizaciones y no de los individuos, tiene como enfoque principal es el del análisis de la eficacia con la que emplean los recursos de que disponen para alcanzar sus objetivos. Siguiendo el trabajo de Jiménez Solares (2007)

De acuerdo con este enfoque la estrategia utilizada por sus integrantes a partir de un cálculo en el uso de los recursos es la clave de la movilización. La acción colectiva es un proceso de interacción de grupos para la creación, acceso, consumo, intercambio,



transferencia o distribución de recursos. El conflicto no es otra cosa que la lucha por el control de los recursos escasos en el seno de la sociedad. (s/n)

Esta teoría aun cuando la unidad de análisis es la organización participa del núcleo analítico de la teoría de la elección racional que trata la relación entre los intereses individuales y la acción colectiva, poniendo énfasis en las decisiones del individuo, las cuales, según este modelo, están determinadas por la evaluación de los beneficios esperados y los costos de acción (Olson, 1992). Desde este enfoque Crozier y Friedberg (1990) realizan una suerte de síntesis entre ambas perspectivas y caracterizan la acción colectiva como soluciones creadas por actores relativamente autónomos, con sus recursos y capacidades a los problemas que plantea -en particular- el de la cooperación con miras a cumplir objetivos comunes. Para estos autores, el mínimo de “organización” de los campos de acción social que orienta los comportamientos de los actores y condiciona su libertad. Por esta razón, afirman, que toda empresa se basa en un mínimo de integración de los comportamientos de los actores involucrados, cada uno de los cuales persigue objetivos divergentes incluso contradictorios y por ello se instituyen “juegos estructurados” cuyas reglas indican una serie de estrategias que pueden resultar ganadoras, entre las cuales los actores deben elegir.

Si “el discurso es el proceso a través del cual la realidad social llega a ser, si es la articulación del conocimiento y el poder, de lo visible y lo expresable” (Escobar 2007: 77) entonces no es irrelevante mostrar cómo, en la definición corrientemente aceptada para analizar la acción colectiva y la organización de los colectivos humanos como individuos egoístas que calculan los beneficios de su cooperación – misma premisa de la teoría de juegos y el neoinstitucionalismo- hay una producción activa de no existencia de aquellas prácticas de vida común que dan pie a la existencia de espacios colectivos como espacios de reproducción de la vida que están creando otras organizaciones u otros “modos de hacer” (Zibechi, 2015: 55-79). Pero no se trata sólo de concebir un esquema de pensamiento que permita pensar más allá de la monocultura racional sino de avanzar en dirección de una decolonialidad epistémica que nos permita replantear la forma de entender y de producir conocimiento y transformar “no sólo los contenidos sino los términos mismos de la conversación.” (Escobar, 2003, p.13).

Y hacerlo sin afán alguno de imponer una mirada totalizadora –colonializante- ni esencialista sino por el contrario, introducir, por medio de la recuperación de fragmentos la perplejidad y el asombro que suscita el reconocimiento de la diversidad, como expresión de las infinitas posibilidades de vida común que tiene-tenemos como seres



colectivos. En este sentido, nos sumamos al llamamiento de Gustavo Esteva (2012 p. 33) cuando afirma que necesitamos primero reconocer la existencia de las distintas modalidades comunitarias que existen y que han existido en diversos tiempos y lugares [...] antes de que la industrialización capitalista o socialista las convirtiera en recursos. La referencia a los recursos compartidos o bienes comunes no abarca la inmensa riqueza de las organizaciones sociales incluidas en esos términos.

De ahí que la propuesta que presenta Maricela Svampa (2008) “Sin ánimo de ontologización alguna” (p.11) respecto a las movilizaciones que van configurando movimientos sociales en AL, nos permite avanzar en la dirección que queremos y necesitamos. En efecto, al mostrar la autora que los movimientos sociales en AL poseen una dinámica organizacional y confrontacional propia que está basada en una propia definición la territorialidad -concebida como habitat y comunidad de vida-; la combinación de la acción directa con la acción institucional en la confrontación; la democracia asamblearia y una tendencia a la autonomía. Y que se oponen al discurso ecoeficientista y al modelo de desarrollo monocultural y destructivo, y la exigencia de desmercantilización de los llamados “bienes comunes”. (p.p 9-17)

En esa dirección, la propuesta –exploratoria- que aquí presentamos es simple, en síntesis se trata de que más que pensar que el movimiento social es el tiempo espacio de insurgencia que articula de manera espontánea la acción de individualidades, comprenderlos, siempre siguiendo a Zibechi, como el espacio-tiempo que hace visibles los espacio-tiempos interiores, que resultan invisibles en la cotidianidad de la dominación. (2006 p.p 17-18). Que son esos espacio-tiempos interiores –lo que se esconde detrás y debajo- que se articulan en los elementos constitutivos de la comunalidad (su inmanencia) y que la comunalidad es mucho más que un concepto, por lo que hay que entenderlo como un todo vivido en la espiral que propone Guerrero (2015: 126) “El suelo que se pisa, la organización de la gente que pisa ese suelo, lo que esta gente hace y lo que logra (es decir, los pilares: territorio/autoridad/trabajo/fiesta)”.

Sin afán de “ontologizar” la propuesta de la “comunalidad” -creada por separado de acuerdo con Guerrero (2015) por Floriberto Díaz y de Jaime Martínez Luna- identifica el territorio y el espacio común; el trabajo colectivo; la autoridad o los espacios de acuerdo (asamblea) y la fiesta, como elementos constitutivos –inmanentes- de la comunidad. Tales elementos son más bien vividos que pensados Así precisamente lo entiende Arturo Guerrero (2015:): “Los pilares, los principios y las veredas no están aparte, en un mundo ideal platónico, sino que conforman el horizonte dentro del cual se formula,



recuerda y ejecuta lo consensuado, lo tenido por correcto” (p. 115). El trabajo colectivo como obligación hacia la comunidad (tequio), el trabajo colectivo como servicio hacia los otros (apoyo mutuo o mano vuelta) y las fiestas o las ceremonias es la expresión del don comunal en los que se recrea el Nosotros en el que “el individuo es una rareza (que, como plaga, en los últimos años se ha extendido) ... La vida comunitaria cuenta con múltiples espacios y tiempos donde hombres, mujeres y críos se realizan participando... No es un paraíso: es vida cotidiana” (2015: 117)

Y, comprender que ese Nosotros comunal que se recrea –en diversas formas y desde proyectos político-epistémicos de la transmodernidad- es también un entorno cognitivo que engloba sujetos no humanos y una relación mano-cerebro vinculada a la siembra, la cosecha y los alimentos y los rituales en la inminencia de lo sagrado. Por lo que constituye, en efecto, otra episteme –otro conocimiento y otro modo de conocer- y otra ontología. Como lo afirma Martínez Luna: “Somos comunalidad, lo opuesto a la individualidad, somos territorio comunal, no propiedad privada; somos compartencia, no competencia; somos politeísmo, no monoteísmo. Somos intercambio, no negocio; diversidad, no igualdad, aunque a nombre de la igualdad también se nos oprima. Somos interdependientes, no libres.” (2009 p. 17)

Consideramos que es esa la vertebralidad de los diferentes modos de recrear el nosotros comunal y de ampliar o defender los ámbitos de comunidad que es necesaria recuperar para comprender las movilizaciones y los movimientos sociales y la acción colectiva no desde la “perspectiva individualista y acumulativa” (Bonfil 2003: 57 y ss. en Gonzáles de la Fuente, 2011: 83-84) y de este modo, dejar de tener que adaptar conceptos como “movilización de identidades y las estratégicas o la movilización de recursos y oportunidades políticas” y dejar de estar obligados a “girar sus conceptos según nuestras realidades”. (Mamani s/a:27)

Pensar, por ejemplo, es toda esa “tipología de las asambleas realmente existentes que hoy atraviesan los movimientos sociales y las acciones colectivas en América Latina” (2008 p.15) en las diversas fuentes de construcción de autonomías y los acuerdos de los otros mundos desde la exterioridad alternativa de la modernidad, la monocultura del tiempo lineal, y la elección racional.

Hacerlo, nos obliga a dejar la protectora red de la teoría establecida y a ampliar los márgenes de la disciplina, para avanzar peligrosamente al filo de todos los espacios posibles sobre una realidad aun no nombrada. ¿Cómo habitar un espacio así, y -al mismo tiempo- cómo no hacerlo? de las infinitas posiciones posibles, de todos los



territorios... solo uno es habitable: andar como el funámbulo que nos recuerda Genet, con el riesgo de caer, sobre el alambre. Planteando las preguntas que presenta claramente Escobar (2015) desde las cuales se originan las propias bases del pensar: ¿con quién, cómo y desde dónde pensamos? ¿Con qué propósitos? ¿Qué significa pensar con otros – [...] (Escobar 2015 p. 9) Para no quedarnos atascados en la torre de marfil del pensamiento crítico que se imagina como una luz que se lanza desde fuera y en un lugar distante para iluminar mejor el aquí y el ahora, sino dar ese paso que avanza cuidadosamente hacia atrás, en el caminar del reconocer-desconocer los parámetros en los que se sostiene la legitimidad de la disciplina y los “cánones de las ciencias sociales” que se presentan como referentes para determinar la validez de lo que puede ser o no considerado como conocimiento.

Bibliografía:

Ahumada Infante, Aldo «Transmodernidad: dos proyectos disímiles bajo un mismo concepto», Polis [En línea], 34 | 2013, Publicado el 22 julio 2013, consultado el 19 febrero 2017. URL: <http://polis.revues.org/8882>

Candón Mena José 2012 Los Movimientos Sociales ayer y hoy. Una aproximación teórica Actas II Jornadas sobre Movimientos Sociales, disponible en: <<https://bit.ly/2XgSDZ0>>.

Castro-Gómez Santiago (2005) La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816) Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Recuperado de <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/157.pdf>

Crozier Michel, Erhard Friedberg 1990 El actor y el sistema: las restricciones de la acción colectiva Alianza Política 391 páginas

De Sousa Santos, Boaventura 2006. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes. En publicación: Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires) ISBN 987-1183-57-7 Disponible en la World Wide Web: <<https://bit.ly/2Myzlw9>>

Dussel, E. (2005). Transmodernidad e Interculturalidad: interpretación desde la Filosofía de la Liberación. México, D.F., UAM-Itztapalapa. Recuperado el 22 de mayo de 2019 de <red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/090514.pdf>.

(2009) Filosofía de la liberación <http://www.olimon.org/uan/filosofos-dussel.pdf> revisado en marzo 2016

Escobar Arturo (2003) Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano Revista: Tabula Rasa

(1996) La invención del tercer mundo. Editorial Norma. Bogotá Colombia.



(2015) Presentación. En Leyva Xochitl, et al (Coord) (2015) Prácticas otras de conocimiento (s) Entre crisis, entre guerras. Cooperativa Editorial RETOS, Chiapas, México

Esteva Figueroa, Gustavo (2012) «Regenerar el tejido social de la esperanza», Polis [En línea], 33 | 2012, Publicado el 23 marzo 2013, consultado el 25 noviembre 2016. URL: <http://polis.revues.org/8487>

(2016) Mas Alla Del Desarrollo en: <file:///Cp./Users/LENOVO-C260/Downloads/Mas_alla_del_Desarrollo_La_buena_vida._G.pdf. revisado en agosto 25 2016

Graeber David (2011) Fragmentos para una antropología anarquista. Editorial Virus, Barcelona, España. En: <<https://cabezasdetormenta.noblogs.org/files/2013/02/David-Graeber-Fragmentos-de-Antropologia-Anarquista.pdf>>.

Grosfoguel Ramón, (2013) Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/ epistemicidios del largo siglo XVI. Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.19: 31-58,

(2012). «El concepto de «racismo» en Michel Foucault y Frantz Fanon: ¿teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no-ser?» [versión electrónica]. Tabula Rasa 16 (2012), 79-102.

Guerrero Osorio, Arturo, La comunalidad como herramienta: una metáfora espiral II Bajo el Volcán [en línea] 2015, 15 (Septiembre-Febrero): [Fecha de consulta: 23 de febrero de 2019] Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28643473007>> ISSN 8170-5642

Jiménez Solares, C. (2007), Acción colectiva y movimientos sociales. Nuevos enfoques teóricos y metodológicos. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Guadalajara, México <https://es.scribd.com/document/317564604/Carlos-Jimenez-Solares-2007-Accion-Colectiva-y-Movimientos-Sociales-Nuevos-Enfoques-Teoricos-y-Methodologicos>

Martinez Luna Jaime (2009) Eso que llaman comunalidad. Colección diálogos, Pueblos originarios de Oaxaca, Conaculta, México.

Mamani Ramírez Pablo (s/a) Wiphalas y fusiles: poder comunal y el levantamiento aymara de achakachi-omasuyus (2000-2001) disponible en: <https://bit.ly/3hJYoIh>>.

Quiroga María Virginia (2013) Perspectivas para el análisis de la acción colectiva: algunas reflexiones críticas y posibles aportes desde la teoría de la hegemonía. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 15, nº 30. Segundo semestre . pp. 25-44.



Svampa, M. 2008. La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes. Disponible en: <www.flacsoandes.edu.ec/agora/la-disputa-por-el-desarrollo-territorio-movimientos-de-caracter-socio-ambiental-y-discursos>. ; consulta:

Tanaka Gondo Martín (1995) Individualismo metodológico, elección racional, movilización de recursos y movimientos sociales: elementos para el análisis Debates en Sociología. Depto. Ciencias sociales PUCP No.19 pp 219-256

Zibechi, Raul (2006) Dispersar el poder - la ed. - Buenos Aires: Tinta Limón 208 p.; 20x14 cm. (Pensar en movimiento; 3) ISBN 957-71GR9-C, -2

(2015) La emancipación como producción de vínculos. En publicación: Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado. Ceceña, Ana Esther. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2015. pp. 123-149. ISBN: 987-1183-34-8



Tensiones territoriales como un factor de unificación.

Organización social en Quiba.

Jesús David Portela Velasquez

Resumen

La presente investigación tiene un enfoque crítico social, es así como se quiere develar el papel de las prácticas organizativas en el barrio de Quiba medio ubicado en ciudad Bolívar a partir de la reconfiguración social desde el fenómeno de la reubicación territorial por riesgos naturales. Desde allí, apoyar en un trabajo mancomunado para lograr la reubicación territorial en Cundinamarca a través de mecanismos de participación y procesos políticos y el establecimiento de proyectos productivos en el nuevo territorio, desde un enfoque cultural y ambiental el cual es un interés fundamental de la población, ya que conciben la producción económica de la mano con la preservación medioambiental. En este sentido el eje principal de la presente investigación es analizar el fortalecimiento de las prácticas organizativas a partir de la reubicación territorial en la comunidad de Quiba.

Palabras clave

Territorio; Políticas públicas; Prácticas políticas; Reubicación; Fortalecimiento organizativo; Reconfiguración social.

Abstrac

This research has a critical social approach, this is how we want to unveil the role of organizational practices in the middle Quiba neighborhood located in Bolivar city based on social reconfiguration from the phenomenon of territorial relocation due to natural hazards. From there, support in a joint work to achieve territorial relocation in Cundinamarca through participation mechanisms and political processes and the establishment of productive projects in the new territory, from a cultural and environmental approach which is a fundamental interest of the population, since they conceive the economic production of the hand with the environmental preservation. In this sense, the main focus of this research is to analyze the strengthening of organizational practices based on territorial relocation in the Quiba community.

Keywords

Territory; Public policies; Political practices; Relocation; Organizational strengthening; Social reconfiguration.



El desplazamiento forzado es un fenómeno que se ha presentado en Colombia Durante todo el siglo XIX por parte de actores y grupos que transitan y se sustentan en técnicas guerrilleras como es la extorsión, tráfico de estupefacientes, ventas de armas y despojo violenta de terrenos. Este fenómeno se acrecentó durante la década de los 80's ya que distintos grupos armados contrainsurgentes, estatales e insurgentes se enfrentan entre sí en los territorios donde la presencia gubernamental e institucional es casi nula. ubicando a la población civil en el medio. Según la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES). En el año 2000 la cifra de personas en condición de desplazamiento estaba alrededor de 1'800.000 desde estudios hechos por organizaciones internacionales. En el año 2005 esta cifra subió a 3'500.000 superando países como Afganistán, Angola, Irak. Este fenómeno predomina en zonas como el sur de Bolívar, Chocó, Cauca, Santander, Guajira. En estos territorios periféricos del país la población civil se encuentra martirizada por el exceso de fuerza de diferentes actores armados como lo es la guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas militares. Lo cual genera cierta incertidumbre y miedo por parte de los mismos, lo que obliga a desplazarse de su territorio en búsqueda de protección y bienestar.

En este sentido se presenta un desplazamiento intranacional, siendo los focos las ciudades. Ya que allí se evidencia mayor presencia estatal tanto como oportunidades laborales y económicas. Según el Dane en una encuesta hecha en el año 2003 las ciudades con mayores índices de población migrante son Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Pero uno de los mayores inconvenientes de estas poblaciones que se movilizan al interior del país por el desplazamiento forzado es que deben salir de sus territorios de manera inmediata con los objetos que puedan llevar consigo y el resto dejarlo, es por ello que llegan a las urbes sin mayores recursos lo cual dificulta la adaptación correcta en los nuevos espacios, es por ello que se deben dedicar en su mayoría a trabajos informales o en los casos extremos pedir ayudas. En este sentido la ubicación de estas personas se da en el mejor de los casos por el "mecanismo llamada" expuesto por Bauman en el libro publicado en el 2013 *extraños llamando a la puerta* en él, explica que la movilización no se da de manera caótica sino que las personas a través de un acto racional buscan contactos o parientes los cuales puedan generar procesos cooperativos y de ayuda. En el caso contrario donde no existe una ayuda externa se presentan casos de apropiación territorial desde la ilegalidad ubicándose mayoritariamente en las periferias de los centros urbanos.



En esta investigación abordaremos principalmente el caso de Quiba medio, ubicado en las afueras de la localidad de Ciudad Bolívar, donde se presenta el caso de la apropiación territorial sin escrituración que es un fenómeno recurrente en Colombia dado por la necesidad y la autogestión de las personas desplazadas que deben buscar alternativas como los terrenos baldíos en las zonas periféricas de la ciudad. Lo que se conoce coloquialmente como “zona de invasión”, las cuales tienen restricciones en su utilización residencial ya sea por factores de riesgo (remoción en masa e inundaciones) o por ser reservas ambientales. En este sentido al hablar específicamente de Quiba medio. Donde residen alrededor de 50 familias que han hecho sus viviendas a través de la autogestión, con recursos como la madera, cartón y zinc. En su mayoría se sustentan económicamente a través del reciclaje ya que en la alcaldía de la Bogotá Humana parte de la población trabajo con la empresa pública Basura cero pero después del cambio de alcaldía esta empresa cierra obligando a la población a trabajar de manera independiente. Dedicándose en labores variadas como prestación de servicios en empresas de aseo y seguridad. Como también se dedican a labores independientes como cultivo de hortalizas y reciclaje.

A partir de la notificación de desalojo por parte de la alcaldía en el año 2018 empieza la conformación de la organización Renacer de la familia dirigida por la representante legal Alba Quiñones, habitante del barrio Quiba medio ubicado en Ciudad Bolívar. Esta organización tiene como objetivo defender el derecho a la vivienda vulnerado a la población que reside allí. Siendo una muestra de arraigo y apropiación del territorio, que nace del rompimiento del tejido social y la incertidumbre que genera el proyecto de desalojo. Descrito en palabras de Murillo en el libro *La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible* “el territorio construido como un espacio de relaciones sociales, donde existe un sentimiento de pertenencia de los actores locales respecto a la identidad construida y asociada al espacio de acción colectiva y de apropiación, donde son creados lazos de solidaridad entre los actores. La construcción de la identidad, para el pensamiento subjetivista, es antecedida por la construcción de la diferenciación a partir de fronteras que los grupos determinan, llamadas fronteras simbólicas. (2010, Pág 128).

A partir de una problemática en común la población perteneciente al territorio y de orígenes distintos desarrolla una identidad colectiva. En búsqueda de alternativas, poniendo en relevancia la importancia de mantenerse unidos, la cual es la meta de dicha organización es así como la organización *Renacer de la familia* fundada por Alba



Quiñones se convierte en uno de los símbolos de la comunidad en búsqueda de la exigencia de los derechos humanos fundamentales de tercera generación como lo es el derecho a la vivienda, a pesar de que exista entre ellos una frontera simbólica dado por tener cargas históricas, culturales y locales distintas. El contexto forma relaciones sociales donde fluyen esas cargas e imaginarios en un espacio delimitado y allí se empiezan a establecer códigos comunes lo que genera sentido de pertenencia y noción de propiedad territorial. De allí nace la incógnita ¿Cuáles son las dinámicas en el fortalecimiento organizativo de la comunidad de quiba desde el proceso de reubicación en el cumplimiento de las políticas públicas que solucionen la problemática de vivienda durante el año 2018-2019?

Desde el anterior planteamiento se ha propuesto una línea de acción para llegar a vislumbrar la respuesta a dicha incógnita. En primer momento se analizará las dinámicas del fortalecimiento organizativo de la comunidad de Quiba desde el proceso de reubicación en el cumplimiento de las políticas públicas que solucionen la problemática de vivienda durante el año 2018-2019. Para el cumplimiento del objetivo general se han propuesto tres objetivos específicos los cuales parten de momentos diferentes. El primero de ellos es definir la configuración del tejido social dentro del territorio del barrio Quiba medio en los años 2018-2019, para después de ello evidenciar las tensiones dentro de la población debido a la pluralidad cultural que existe en Quiba y su influencia en la generación de una identidad colectiva y por último identificar las estrategias de la acción colectiva como un generador de resistencias y dinamizador en la resolución de problemáticas.

Para el logro de lo anteriormente expuesto la investigación se basa en el paradigma crítico social, dado su enfoque reflexivo desde las perspectivas comunitarias en las que se encuentra adscrito. En pro del cambio social y la emancipación. Es desde allí que parte el trabajo investigativo mancomunado con la comunidad de Quiba (ubicada en ciudad Bolívar) para la protección al derecho a la vivienda digna. Dado que las personas asentadas allí han sido trastocadas por el conflicto armado y han tenido que desplazarse de su territorio de origen. Estas son consideradas víctimas del conflicto. De esta manera se les reconoce derechos diferenciales a partir de la ley 1448 del 2011. la cual, entre otras cosas reconoce el derecho a la tierra a través de la restitución. A partir de lo anterior se conforma la organización *Renacer de la familia* la cual vela por los derechos territoriales y de propiedad en contra de los intentos de desplazamiento de la alcaldía por el riesgo de remoción en masa. Es desde allí que se comienza a hacer indagación



de primera mano sobre dicha organización. Dado que el fenómeno sigue en proceso, es un análisis exploratorio como lo afirma Sampieri “se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (Sampieri, Collado & Baptista, 2010. Pág. 79), Es decir que partimos de información de primera mano y estrategias inductivas en lugar de partir de teorías y comprobarlas.

En este sentido este trabajo se enmarca dentro del enfoque cualitativo desde la investigación social, ya que permite interpretar y entender las prácticas cotidianas que se evidencian en las dinámicas a partir de las percepciones, experiencias o interacciones de los habitantes y sujetos pertenecientes a la comunidad de estudio, la cual en este caso es la comunidad de Quiba en la localidad de Ciudad Bolívar, dando así una mirada holística del fenómeno.

En cuanto a las técnicas metodológicas, se ha llevado a cabo principalmente la observación participante que es “empleada para designar la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes, durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo” (Taylor y Bogdan, 1987, p.33) para así poder hacer un diagnóstico donde se pueda identificar y caracterizar a dicha población, también se realizarán entrevistas semiestructuradas ya que estas nos permiten recolectar información de primera mano como lo dice Denzin y Lincoln (2005) quienes plantean que la entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas como técnica de recogida de datos, cuando se hace referencia a entrevistas semi-estructuradas también se hace la planificación de un guión temático que determine la información que se quiere obtener a través de preguntas abiertas que a medida del tiempo permitan ir construyendo un conocimiento generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado y de este modo poder responder a nuestro objetivo de describir los procesos de movilización que se dieron a partir del desplazamiento forzado y como esta a su vez ha constituido la configuración de tejido social dentro del territorio, en cuanto a las percepciones y posturas de la comunidad, acerca de las dinámicas que se viven allí.

Para finalizar, se llevará a cabo un proceso de sistematización de experiencias, donde se seleccionaron tres momentos fundamentales en el proceso de constitución y



fortalecimiento de su organización que son: 1. Fundación de la organización Renacer de la familia 2. Construcción de proyectos para convocatorias distritales 3. Elaboración de dichos proyectos por la comunidad. Esta sistematización se hace de manera retrospectiva reconstruyendo las experiencias y orientándose a mejoras futuras en otros posibles proyectos, el modelo de proyecto llevado a cabo con la comunidad tiene como objetivo replicar en otras comunidades con énfasis en el fortalecimiento organizativo

Antecedentes bibliográficos

El proceso de configuración territorial está dado por el “loteo” inicial agenciado por los fraccionadores del suelo y su ocupación y consolidación se van produciendo como resultado de los esfuerzos individuales de las familias poseedoras y del trabajo colectivo mediante fuertes procesos organizativos de la comunidad. Los primeros pasos del desarrollo urbano de este asentamiento autoproducido están asociados a la resolución de las necesidades primarias urgentes (acceso agua potable, construcción de drenajes, acceso a energía eléctrica y garantías de una mínima movilidad).

Luego de más de 25 años de trabajo colectivo estas necesidades primarias están resueltas mayoritariamente. Los problemas actuales tienen otras dimensiones. En lo físico espacial, la necesidad de la consolidación de las viviendas, el desarrollo de bienes y servicios de escala vecinal y local, la necesidad de adecuar espacio público, la inexistencia de un parques públicos y equipamientos, entre otros. En lo social, la necesidad de fortalecer los espacios comunitarios y el tejido social creado a lo largo de su historia, efectuar un relevo generacional y garantizar su sostenibilidad. En lo socioeconómico a pesar de los avances en la consolidación del barrio los recursos necesarios para su permanencia y mejora de la calidad de vida no son suficientes, existen muy pocas fuentes de empleo local y permanente, no hay empleo de largo plazo ni estabilidad, como tampoco hay emprendimientos que involucren a los habitantes de Quiba, la mayoría de sus habitantes trabajan en actividades económicas informales.

En lo ambiental, presentan fuertes problemáticas vinculadas con la extracción a cielo abierto de material de cantera que degradan el territorio y manejo de materiales no reutilizables lo que generan problemas de deficiencia respiratoria aguda en la población y niega la posibilidad de desarrollos más sostenibles. Así mismo, la ausencia de suelo para la vivienda social y las débiles políticas públicas contribuyen a que otras familias estén llegando a ocupar suelo no apto para la urbanización, con fuertes pendientes y en riesgo de deslizamiento por remoción en masa, allí hoy se asientan más de 50 familias que deben ser reasentadas adicionales a las 130 del proceso que se inició hace 6 años.



Estos son solo algunos de los problemas que enfrentan las comunidades presentes en el sector Quiba y que cobija a más de 2500 familias en ciudad Bolívar.

Marco teórico

Reconfiguración social

En un primer momento tomamos el texto de Leslie Parraguez Sánchez, encontrado en la Revista Internacional de Sociología, titulado “La reconfiguración de los movimientos sociales en el proceso global de urbanización capitalista”, dado que en este la autora hace una discusión teórica que relaciona dialécticamente esta transformación con los cambios urbanos que acompañan a la nueva estructura productiva global. Parraguez (2010) Primero, identificando las limitaciones de la Sociología de la Acción de Touraine para explicar los movimientos sociales desde la ambivalencia del individualismo moderno, luego, enriqueciéndose con otros planteamientos teóricos, de esta manera, se visualiza un sujeto emergente que se moviliza por una política de estilo de vida, es decir, “Por elegir cómo quiere vivir en función de su manera de combinar los principios generales de la modernidad y las identidades particulares. Así, se resignifican a las luchas urbanas que se conciertan hoy frente a cambios en las ciudades, especialmente, el surgimiento de la lucha por el derecho a la ciudad, en tanto nueva identidad-proyecto que permite a diversos movimientos sociales emergentes, dentro de ciudades concretas, definir nuevas posibilidades de vida urbana”. (Parraguez, 2010. pp.705)

Dentro de la discusión teórica, se nombran autores como Lechner en cuanto a que considera que la actual debilidad de “sueños colectivos” no implica la desaparición de “lo colectivo”, ya que el vínculo social está presente, aunque sea por ausencia y como carencia. Entonces, de acuerdo a lo anterior la autora, incluye a Bauman afirmando que este vínculo se ha transformado convirtiéndose en algo eventual después de la crisis del trabajo, ya que esta crisis se refiere a la desconexión, aunque no divorcio, entre capital y trabajo, donde el capital se suelta de su dependencia del trabajo, producto de una nueva libertad de movimiento inimaginable en el pasado (Parraguez, 2010) Y de este modo explica la transformación que se ha venido dando en la acción colectiva dentro de los nuevos contextos y espacios de ciudad.

Ahora bien, en esta discusión entra (Touraine 1987).La sociología, desde distintas perspectivas, ha permitido comprender los motivos por los cuales muchos viven hoy en crisis, pero no basta con hablar globalmente de ‘la’ fractura social para comprender los nuevos mecanismos de la sociedad actual, sino lo que dicha fractura ha venido insertando en la cotidianidad, ya que para Touraine, el individualismo, después de la



globalización no es una elección sino hecho inaplazable, sin embargo, a lo largo del texto, se evidencia como la discusión se torna, a la transformación en los movimientos sociales emergentes entre la defensa de la identidad y la política de vida, donde aclara que la acción colectiva, hoy es diferente de la del pasado, no es poca ni precaria como suele creerse, sino que se trata de una participación en la cual el ámbito de la acción se ha desplazado desde los intereses colectivos generales hacia los intereses particulares e individuales (Serrano y Vicherat 2000; Castells 1997).

Este texto nos permite entender cómo en la actualidad y de acuerdo a las necesidades particulares que se presentan, en este caso en los nuevos contextos urbanos, donde un grupo de personas de diferentes partes del país y con diferentes necesidades y culturas reconfiguran el sentido de lo colectivo, a partir de sus particularidades para exigir ante el Estado una solución a la situación que han vivido y que viven actualmente con el proceso de reubicación, es decir, de acuerdo al texto, que debido al territorio y las prácticas que la globalización inserta en este se transforman las prácticas sociales y colectivas de la comunidad y de este modo se reconfiguran la acción colectiva.

Políticas públicas y prácticas políticas

En cuanto a políticas públicas y/o prácticas políticas, tomamos como referencia el texto “Políticas públicas en la transformación social” de Rafael Urbina, la investigación tiene como propósito analizar el alcance de las políticas públicas en la transformación social en el Gobierno Bolivariano 2011. La línea de investigación está referida a políticas públicas y participación ciudadana, por tanto es de gran importancia tenerlo como ya se ha mencionado de referencia dentro de esta categoría, para nuestra investigación. La teoría referencial fue: Teoría de las políticas públicas. Ahora bien, el fundamento legal se enmarco en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999. Según (Urbina, 2012) La indagación fue orientada en la tradición documental, el instrumento de recogida de datos se utilizó la observación documental, emergiendo como teoría, el gobierno y sus ciudadanos, son instrumentos para la construcción de políticas que respondan a las necesidades sociales con el objeto de optimizar sus condiciones de vida, y su entorno.

La importancia de este texto es que como resultado se encontró que hay una democracia plena en el ejercicio del voto, las políticas públicas se dirigen a la inversión social en erradicar la pobreza, educación, salud, vivienda, agricultura, cultura, alimentación, economía, explotación de recursos minerales y otras fuentes de energía menos contaminantes, Venezuela establece alianzas estratégicas con otros países en



suscribir y renovar convenios en comercialización, derechos humanos, diplomacia y paz mundial, con políticas tributarias apuntadas a razones sociales, consolidación del plan de desarrollo de la nación, misiones orientadas en favorecer al pueblo, creación o modificación de leyes en dejar un beneficio social en el orden jurídico del estado, creación de universidades en la formación integral del funcionario policial en materia de seguridad vinculando a la comunidad, donde, se sugiere sean las mismas sociedades garantes de las políticas de gobierno.

Ahora bien, las políticas públicas del gobierno venezolano en el periodo 2011, que viene del proyecto plan Simón Bolívar 2007 – 2013, en su documento plasmó y llevó a la práctica su cometido en la que se analizó lo referente a: democracia, población, petróleo, cultura, economía, alianzas económicas estratégicas, impuestos, producción nacional, energía, inversión social, pobreza, vivienda, misiones socialista, educación, salud, leyes para el bienestar social, agrícola, seguridad, equilibrio y paz mundial. Lo cual nos deja ver la importancia de, en el caso de Colombia el plan de desarrollo nacional, para que la políticas públicas cubran y protejan a las comunidades que sufren de desplazamiento, cabe destacar que en el gobierno venezolano el proyecto Plan Simón Bolívar 2007 - 2013 se consolidaron con buen éxito en la transformación social. Sin embargo falta un tramo, un trabajo por cumplir de ese ambicioso plan donde el ganador por ideología del presidente beneficien y albergue las clases sociales menos favorecidas y más aún las que estuvieron en la oscuridad o discriminadas en gobiernos anteriores.

El documento recoge una visión próspera pero también llama a la sociedad a ser parte de esta propuesta, de este trabajo, que se vincule el pueblo de la mano con las instancia del gobierno o líderes regionales y sus poderes en exponer sus necesidades y juntos construyan políticas públicas que respondan al colectivo para llevar a cabo la consolidación de ese plan y tales políticas se cumplan, y no se conviertan en beneficios particulares o demagógicas. En este documento se puede evidenciar la importancia de las políticas públicas y las prácticas políticas por parte de los ciudadanos en los procesos de configuración y transformación social que se dan dentro de los diferentes territorios de una nación, la importancia de que esto genere un desarrollo tanto para el país como para las comunidades que sufren estos procesos sin garantías de avances. Además de cómo esto tienen que velar por la vivienda, la educación, el trabajo, la economía, entre otros aspectos para unas condiciones de vida digna y un desarrollo y buena planeación de las comunidades migrantes en los nuevos contextos tanto urbanos como rurales.



Desplazamiento Forzado en Colombia

Al hacer referencia a esta categoría se abordará desde algunos planteamientos de Darío Fajardo en su texto *Las guerras de la agricultura Colombiana 1980-2010*. Dentro del cual de manera sucinta expone el desarrollo histórico de los conflictos y como estos a su vez han sido utilizados como mecanismo de desalojo por razones económicas dado que en palabras del autor “Las empresas no han dudado en apropiarse de manera ilegal de terrenos pertenecientes a minorías étnicas o pequeños campesinos, muy a menudo con la connivencia de los gobiernos que no han protegido a los legítimos propietarios o han permitido interpretaciones de la ley a su desfavor” (2014, Pág. 65). En algunos casos los gobiernos han legitimado estas acciones de los actores que transitan en la ilegalidad negando la compensación de las víctimas dado por argumentos como la buena fe en la compra. Lo que obstaculiza los procesos jurídicos en la restitución de tierras de las personas trastocadas por este fenómeno. A su vez dificulta la reconstrucción del tejido social dado que la población es arrebatada de su identidad en relación a la tierra y como consecuencia fractura el tejido social, como lo afirma Fajardo “Estas expropiaciones han causado consecuentemente el desplazamiento, a veces precedidos o acompañados por la destrucción de sus pertenencias, su consiguiente proletarización y la pérdida de identidad cultural, especialmente por parte de grupos étnicos o minoritarios que, en muchos casos, por legislación nacional o internacional los gobiernos tienen necesidad de proteger” (2014, Pág. 65). En este sentido, tanto la ausencia como la presencia de actores estatales traen consigo la vulneración de la población en condición de desplazamiento. Dado por la discrepancia de las leyes de protección con el actuar del estado.

Los procesos de desterritorialización por los cuales comunidades son retiradas de manera forzada de sus lugares de origen. Donde coexisten, producen y se generan relaciones sociales ocasiona la reconfiguración de las prácticas fundamentales como lo son las formas de producción, dado que por el empobrecimiento y la falta de lazos de cooperatividad se dedican a labores como aparceros o jornaleros, los cuales cumplen labores variadas en territorios rurales, en tanto que en las zonas urbanas surgen barriadas o comunas ubicadas en las zonas periféricas las cuales son expresiones de los ex propietarios como vía para la proletarización y formación de ejércitos de reserva. Como lo afirma Fajardo “ La agudización del empobrecimiento de los moradores y su emigración, en la medida en que la mano de obra excedente debe buscar trabajo en las demandas temporales de las zonas aledañas de agricultura campesina, en los mercados más alejados de la agricultura comercial, en las demandas ocasionales de



trabajadores no calificados en los mercados urbanos, en la ampliación de infraestructuras viales, la exploración de recursos del subsuelo o en la ampliación de la frontera agraria, incluyendo las labores de los cultivos proscritos” (2014. Pág. 70) Este fenómeno tiene un impacto directo en el desarrollo económico dado que el estancamiento de la productividad a nivel nacional convierte a Colombia en un país poco competitivo el cual pierde cada vez más su soberanía alimentaria. por la concentración de la tierra y su improductividad en el uso como por ejemplo, la ganadería extensiva y cultivos permanentes.

Hallazgos

El presente trabajo investigativo se encuentra aún en desarrollo, dado que el proceso de reasentamiento en sitio sigue vigente, pero desde las técnicas metodológicas elaboradas se puede vislumbrar algunos fenómenos inmersos en las prácticas organizativas de la comunidad de Quiba que han dirigido el rumbo de la propuesta de los integrantes en temas de vivienda. En la entrevista elaborada el día 10 de Noviembre en la comunidad. La cual fue hecha a la lideresa comunal Luz Marina proveniente del territorio de Córdoba donde desempeñaba la función de representante legal de organizaciones como lo afirma en el siguiente apartado “Yo conseguí un proyecto dado que era la representante legal de las 28 organizaciones ¿y sabes que significa eso? Mucha responsabilidad, por que una pide y la otra pide y yo lograba llevarles proyectos, no les quedaba mal y las personas así mismo participaban, ya que algunas instituciones como la secretaría de salud se comunicaba para un proyecto con capacidad de 1.500 personas, llegaban a participar y de manera activa, no como aquí en Bogotá que mantener en pie una sola organización es muy difícil, todos jalan pa su lado” Desde este apartado se pueden evidenciar algunas de las tensiones organizacionales que retrasan los procesos del proyecto de vivienda y reasentamiento en sitio . Dado que los movimientos sociales -en los cuales se congregan las personas- se sitúan alrededor de problemáticas o conflictos en específico. Según Alan Touraine la acción social se conduce hacia la lucha de los agentes contra un adversario (material o simbólico) por el control de un campo social en específico (2006. Pág 06). En este sentido por lo que se está luchando se aísla de su adversario, depende totalmente del actuar de los sujetos frente a lo que está en juego, en este caso el derecho a la vivienda.

Desde el contexto de movilización hacia un espacio urbano se puede entrever la imposición de dinámicas y prácticas para acoplarse a la ciudad. Donde la individualidad dada por la hostilidad de las prácticas que pasan por las lógicas capitalistas permean



las relaciones sociales, es por ello que Luz marina afirma que la congregación bajo una misma problemática por parte de la comunidad es una tarea tensionante dado por la relevancia de los intereses individuales en comparación a el esfuerzo invertido. Es decir que los sujetos que participan en la organización buscan tener la menor cantidad de responsabilidades con la mayor cantidad de beneficios como en el caso visto en la entrevista “se aprovechan de la condición de víctimas ya que cuando participan en la mesa local o nacional de víctimas en representación de todos, no se toman la labor en serio, en el año 2011 cuando nos convocaron a plantear la ley de restitución y reparación de víctimas. con representantes de todo el país, la gente se la pasaba tomando y culiando. Cuando llegaban las reuniones no estaban atentos y se la pasaban dormidos. y en ese programa se gastaron 25.000 millones de pesos donde le hubieran podido dar a cada víctima por lo menos un mercado, en vez de sacar a pasear a sus representantes que lo que buscan es llenarse sus bolsillos” Según Oscar Davila en su texto *acción colectiva y asociatividad poblacional* aborda el fenómeno de las tensiones organizativas en el ámbito barrial “Las juntas de vecinos, como instancias de representación vecinal, muestran niveles de agotamiento en cuanto a sus definiciones y quehaceres, las cuales no estarían dando cuenta de los nuevos requerimientos, tanto cualitativo como cuantitativo del mundo de sus representados al nivel de las necesidades e inquietudes. Donde los modelos de asociatividad local que se hallan presentes en las dinámicas de juntas de vecinos, no guarden estrecha relación en cuanto a las expectativas, necesidades e intereses de los vecinos, cuestionando la denominación y el ser entendida como organizaciones naturales” (1994, Pág 02). En este sentido se podría cuestionar el papel de el representante como vocero de un grupo o comunidad en específica, dado que la elección del mismo está mediada por intereses particulares.

En el caso de Quiba, la organización ha pasado por cambio de líderes en reiteradas ocasiones ya que no cumplen con las expectativas del rol de coordinador organizacional. Se debe también por el papel pasivo de los integrantes de la comunidad, los cuales no median en la labor de el representante y las instituciones. Dentro de la sistematización de experiencias se pudo evidenciar un claro ejemplo de las problemáticas planteadas dado que la presidenta de la organización llevó a cabo una convocatoria distrital en la cual, a falta de la documentación necesaria fue rechazada. siendo el tema de la delegación de tareas fundamental para los logros organizativos. en este sentido las propuestas hechas a la agencia nacional de tierras en relación al tema de vivienda dará respuesta en el mes de febrero del 2020 lo cual será un momento fundamental para la organización, dado que convergen todos los factores analizados en la investigación.



Referencias bibliográficas

- Bauman. S. (2016). *Extraños llamando a la puerta*. Editorial Paidós.
- Martha Arévalo La reubicación como proceso de desterritorialización tomado de <https://www.redalyc.org/pdf/267/26745428008.pdf>
- Murillo. F. (2010). *La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible*. Universidad Nacional.
- Parraguez, L. 2010. La reconfiguración de los movimientos sociales en el proceso global de urbanización capitalista. Santiago de Chile: Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos.
- Dávila, O. (1994). *acción colectiva y asociatividad poblacional*. Universidad Nacional.
- Serrano, C. y D. Vicherat. 2000. ¿Qué motiva a la gente a actuar en común?: estudio sobre participación social en la población Malaquías Concha comuna de La Granja. Santiago: CIEPLAN.
- Taylor, J., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Editorial Paidós.
- Touraine, A. (2006). *Los Movimientos sociales*. Revista Colombiana de sociología
- Touraine, A. 1987. *El regreso del actor*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Urbina, Rafael A.. *Políticas públicas en la transformación social*, El Cid Editor | apuntes, 2012. ProQuest Ebook Central, <<https://bit.ly/3hXI1rP>>.



Línea Temática 10.
Movilizaciones y demandas conservadoras



Reconfigurações políticas, demandas conservadoras e discursos de/sobre povos indígenas.

Tatiana Bonin

Resumo

Com base em pronunciamentos feitos por integrantes do governo federal brasileiro cujo mandato iniciou em janeiro de 2019 e em posicionamentos de movimentos indígenas, o presente artigo analisa discursos de/sobre os povos indígenas, e os debates que se estabelecem no âmbito da política pública. Argumenta-se que discursos racistas e fundamentalistas proferidos por governantes no Brasil contemporâneo são mobilizados, de maneira especial, por disputas em torno de recursos ambientais, minerais e territoriais, resguardados aos povos indígenas por meio de um dispositivo constitucional, mas intensamente disputados para expansão da produção agropecuária. A metodologia do estudo envolve a análise de notícias publicadas em jornais de ampla circulação nacional e em portais de notícias ao longo do mês de janeiro, nas quais integrantes do atual governo pronunciam-se sobre os direitos indígenas, e em que representantes do movimento indígena afirmam seus pontos de vista. A análise mostrou que estão em disputa os sentidos da terra, vista, por um lado, como recurso de vida, destinada à posse indígena e sob proteção da União e, por outro lado, como recurso para exploração e expansão do agronegócio, sob a forma da propriedade privada. Mostrou, ainda, o ressurgimento de discursos governamentais integracionistas, comuns no período ditatorial brasileiro, por meio dos quais se vislumbra a dissolução das diferenças e a inserção indígena na lógica de vida colonial, moderna e ocidental. Os movimentos indígenas, por sua vez, defendem o respeito aos seus modos ancestrais de pensar e de viver.

Palavra clave

Direitos Indígenas; Territorialidade; Demandas conservadoras; Movimento indígena; Mídia.

Palavras iniciais

Os meses finais do ano de 2018, no Brasil, foram de intenso debate em torno da eleição de candidatos ao cargo mais importante do poder executivo federal – a Presidência da República. Eleito para um mandato de quatro anos, o Presidente pode ser reconduzido ao cargo, na eleição seguinte, por igual período. Isso ocorreu entre os anos de 2003 e



2010 quando o Brasil foi governado por Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), por dois mandatos. Na eleição seguinte, vence Dilma Rousseff, também representando do Partido dos Trabalhadores, de modo que, em 2011, uma mulher assume pela primeira vez a presidência no país. Ela é reconduzida à Presidência em 2015, mas teve seu mandato interrompido em 2016, depois de um polêmico processo de impeachment. Assumiu, então, o então vice-presidente Michel Temer, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

A longa permanência do Partido dos Trabalhadores no governo gerou descontentamentos em setores sociais, econômicos e políticos e produziu o chamado antipetismo, que favoreceu a ascensão da onda conservadora, culminando na eleição de Jair Messias Bolsonaro, em 2018. Um descrédito nas instituições políticas e representativas colaborou também para esse resultado.

Cioccari e Persichetti (2018) afirmam:

Jair Bolsonaro é membro ativo e uma das principais vozes dessa parcela da população que defende a redução da maioria penal e faz apologia explícita às armas. Some-se a isso o fato de ter se envolvido em casos de racismo e misoginia amplamente divulgados pela imprensa. Bolsonaro corrobora a exacerbação de discursos negativos tão presentes na sociedade contemporânea.

As autoras analisam que, ao longo da campanha eleitoral, construiu-se, por um lado, a imagem de Bolsonaro como parlamentar atento a princípios conservadores e defensor dos chamados valores da família, capaz de promover uma moralização na política e, por outro lado, a imagem de alguém que dá voz aos discursos de ódio, ao machismo, à homofobia, ao racismo, ao preconceito que se constitui nos subterrâneos do social e que, por longo tempo, foi velado e coibido.

Apresentamos, a seguir, dois destaques anteriores à eleição do atual presidente, para dar conta de certa continuidade discursiva em sua carreira pública. Em matéria publicada no jornal *O Estado de São Paulo*, o então deputado e candidato à Presidência advoga pela liberação das armas para o “cidadão de bem” e afirma que, munidos com armamentos de primeira linha e livres de sanções, os policiais poderiam “dar mais de dois tiros em ‘inimigos’”. Afirma, ainda, que, caso eleito presidente, “não vai existir o politicamente correto”.¹

O segundo destaque que desejamos fazer diz respeito ao intensivo combate aos direitos territoriais indígenas. Em Dourados, o deputado federal afirmou, em entrevista, que,



caso seja eleito, não demarcará mais nenhuma terra indígena. “Se eu assumir como presidente da República, não haverá um centímetro a mais para demarcação”, disse aos repórteres sul-mato-grossenses ao chegar no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho”². Em abril de 2017, proferiu palestra no clube Hebraica, na zona sul do Rio, e afirmou que acabaria com todas as reservas indígenas e comunidades quilombolas se fosse eleito em 2018. Um mês antes, o deputado sugeriu dar um fuzil para cada fazendeiro utilizar como cartão de visitas contra supostos invasores de terras. Jair Bolsonaro avaliava, em muitos de seus pronunciamentos, que a principal lacuna do Estado é a discussão sobre terras indígenas, pois as demarcações seriam prejudiciais à economia e impossibilitariam o desenvolvimento do agronegócio. Em postagens feitas em redes sociais, afirmava sua oposição aos processos de demarcação de terras indígenas em razão de terem, essas áreas, potencial de exploração mineral, das reservas de água, das jazidas inexploradas de diamante e nióbio, por exemplo.

As afirmações anteriores do atual presidente podem ser caracterizadas como discursos de ódio na medida em que externalizam e propagam preconceitos (Silva, 2011) e, mais do que uma manifestação de antipatia, indicam hostilidade contra determinado grupo (Diaz, 2011). Tais discursos estigmatizam, marcam alguns como inimigos, segregam e tornam pensáveis atitudes hostis e iniciativas que visam banir de certos espaços os sujeitos constituídos como indesejáveis.

A partir da *Convenção Interamericana contra toda forma de Discriminação e Intolerância*, pode-se incluir várias formas de abuso dentro do que se qualifica como discurso de ódio:

o discurso do ódio consiste na manifestação de ideias intolerantes, preconceituosas e discriminatórias contra indivíduos ou grupos vulneráveis com a intenção de ofender-lhes a dignidade e incitar o ódio em razão dos seguintes critérios: idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, opinião política ou de outra natureza, origem social, posição socioeconômica, nível educacional, condição de migrante, refugiado, repatriado, apátrida ou deslocado interno, deficiência, característica genética, estado de saúde física ou mental, inclusive infectocontagioso, e condição psíquica incapacitante, ou qualquer outra condição (Schäfer; Leivas; Santos, 2015, p. 155)

Um dos maiores desafios, em nossos dias, liga-se ao modo como os discursos de ódio se propagam e se naturalizam, nos fluxos das redes sociais e na profusão de mensagens que recebemos diariamente. Partilhadas por um número substancial de



peçoas, tais mensagens localizam em determinados grupos de indivíduos supostas ameaças à ordem moral e/ou social. E um número considerável de pessoas tendem a concordar que existem ameaças advindas de certos grupos populacionais e que, por isso, “algo deveria ser feito”. Na voz de representantes do governo brasileiro reafirma-se essa premissa de que “algo deve ser feito” nos planos individual e coletivo, o que promove e autoriza a hostilidade, a violência, a brutal discriminação. Nas análises que se seguem, abordaremos pronunciamentos que ativam a noção de que “algo deve ser feito” e, desse modo, instrumentalizam, por exemplo, a ação de quem se vale de redes sociais para propagar ódio, racismos, discriminações de toda ordem, a mão daquele que dispara o tiro ou daquele que promove incêndios criminosos em áreas de proteção ambiental. Antes, porém, apresentamos o delineamento metodológico da pesquisa.

Sobre os propósitos e a metodologia do presente estudo

Nos limites do presente artigo, nossa atenção está direcionada, por um lado, para pronunciamentos feitos por integrantes do governo federal brasileiro cujo mandato iniciou em janeiro de 2019 e, por outro lado, para posicionamentos de segmentos dos movimentos indígenas, que atuam em defesa dos direitos estabelecidos no texto constitucional de 1988. Observamos, de modo especial, como os pronunciamentos governamentais mobilizam discursos e posicionam os povos indígenas e seus direitos territoriais como potenciais ameaças ao desenvolvimento nacional.

A metodologia do estudo envolve a análise de notícias publicadas em jornais de ampla circulação nacional e em portais de notícias. O recorte temporal acabou sendo mais amplo, para dar conta de pronunciamentos anteriores à eleição presidencial e composição do novo governo, de modo a traçar certas continuidades. A partir de janeiro de 2019, os procedimentos de seleção de notícias se deram por meio de buscas interessadas, ou seja, em torno de ações presidenciais com foco nas questões indígenas. A pesquisa envolveu rastreamento de fatos, sendo as buscas empreendidas por palavras-chave, data, nomes, ou ainda, números de documentos expedidos. A combinação das palavras-chave “Bolsonaro”+ “indígenas” serviu para realizar a filtragem dos resultados. Num primeiro momento, tomamos o sítio da internet www.cimi.org.br³ como base para proceder a um rastreamento de ações governamentais com impacto sobre os direitos dos povos indígenas. A leitura do conjunto de notícias veiculadas a partir do mês de janeiro de 2019 no referido sítio possibilitou elencar ações e pronunciamentos presidenciais mais relevantes para os propósitos deste estudo. Num segundo momento, selecionamos um pequeno conjunto



de eventos (que será apresentado e discutido nas seções seguintes) e, em torno dele, buscamos os modos como foi noticiado, em veículos de comunicação online de alto impacto. Os veículos de notícias acessados neste segundo momento foram sítios dos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o site do IHU... o portal G1, e o portal BBC Brasil. Por fim, informamos que as matérias consideradas neste texto foram recolhidas no período de janeiro a setembro de 2019.

Disputas em torno da destinação das terras indígenas

Jair Bolsonaro foi eleito presidente no dia 28 de outubro de 2018 com 55,13% de votos válidos e, já nos primeiros dias de seu governo, mostrou claros contornos autoritários, além do viés conservador e das pautas morais assumidas com grupos de eleitores evangélicos. Contudo, a ascensão de uma onda conservadora no Brasil não inicia neste pleito eleitoral. Um traço visível do conservadorismo preponderante no pensamento social (e político) pode ser visto na eleição de deputados e senadores, que, desde 2014, expande o número de parlamentares vinculados à Bancada BBB, termo usado para fazer referência aos vínculos entre a bancada armamentista (“da bala”), bancada ruralista (“do boi”) e bancada evangélica (“da bíblia”) no Congresso Nacional do Brasil. Conforme dados do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP⁴, nas eleições de 2018 ocorreu um crescimento no número de parlamentares vinculados ao Partido Social Liberal, PSL, que em 2014 elegeu apenas 1 deputado e, em 2018, conta com 55. Estes integram a atual bancada evangélica, que congrega 195 do total de 513 deputados federais. Tem-se, assim, um realinhamento da esfera representativa, de âmbito político-eleitoral, de modo a abarcar interesses de segmentos conservadores e, ao mesmo tempo, de empresas transnacionais vinculados à exploração minerária, madeireira, hídrica e do agronegócio.

Uma das primeiras ações do Presidente eleito foi a edição da Medida Provisória (MP) nº. 870, de 1º de janeiro de 2019, transferindo responsabilidades relativas aos procedimentos de demarcação de terras indígenas e quilombolas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Até então, a atribuição de demarcar terras indígenas estava (e voltou a estar) sob a responsabilidade da Fundação Nacional do Índio (Funai), vinculada ao Ministério da Justiça; já as terras de quilombolas são atribuição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), vinculado à Casa Civil. Essa, entre outras ações, visam abrir caminho para a exploração agrária e agrícola, a expropriação e o esbulho da terra, a expansão minerária, madeireira e hidráulica.



A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal (6CCR) emitiu nota técnica afirmando a inconstitucionalidade da Medida Provisória 870/2019 e dos Decretos 9.673/2019 (que transfere a Funai para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) e 9.667/2019 (que transfere responsabilidades pela demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Na nota técnica, afirma-se que as medidas presidenciais afrontam as garantias indígenas na Constituição e violam o direito destes povos à consulta prévia, previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário. Além disso, ao transferir a demarcação de terras para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a Medida Provisória e o decreto 9.667/2019 instauram um conflito entre interesses dos indígenas e das políticas agrícolas da União e de ruralistas que apoiam o atual governo.

Transcorridos 120 dias, qualquer Medida Provisória necessita ser referendada pelo Congresso Nacional para ter força de lei, mas, a Medida Provisória nº. 870/2019 não recebeu referendo, tendo em vista a colisão entre as alterações legislativas propostas e as garantias constitucionais para os povos indígenas no Brasil. Frente à rejeição sofrida no Congresso, o presidente editou nova medida com mesmo teor, que foi posteriormente caracterizada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo com que todas as atribuições da Funai, no âmbito do Ministério da Justiça, fossem retomadas.

As manifestações de segmentos do movimento indígena tem sido frequentes, criticando veementemente os pronunciamentos e ações do presidente brasileiro. Nesse sentido, Avanilson Karajá, em discurso durante a 40ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, afirmou:

O órgão indígena foi de propósito desmantelado porque o licenciamento ambiental, as demarcações e as políticas de consultas são considerados obstáculos pela política econômica do governo. O mais perverso é o incentivo do arrendamento de nossas terras, uma prática ilegal que visa disponibilizá-las ao mercado, ao custo de nossa tradicionalidade.

Em relação aos sentidos da terra e de sua função social, quando se trata de posse e usufruto exclusivo indígena, observamos que as disputas se concentram na possível destinação e nas possibilidades de exploração dos recursos naturais nelas contidos. Nos termos da Constituição Federal de 1988, Artigo 231, “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários



sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. O mesmo artigo define “terras tradicionalmente ocupadas” pelos indígenas “as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. Estabelece-se, ademais, no referido artigo, a destinação das terras indígenas – destinam-se à posse permanente dos indígenas e, apenas para eles se resguarda o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Não significa que não seria possível explorar recursos hídricos, potenciais energéticos, pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, mas tais ações dependem de expressa autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades indígenas que detêm o usufruto sobre as terras.

Para prosseguir nossa argumentação, destacamos uma dimensão da relação entre os indígenas e a terra, anunciada pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2017). Ele afirma que existe uma experiência compartilhada sobre o território que se estabelece de maneira semelhante entre os indígenas:

Ser indígena é ter como referência primordial a relação com a terra em que nasceu ou onde se estabeleceu para fazer sua vida, seja ela uma aldeia na floresta, um vilarejo no sertão, uma comunidade de beira-rio ou uma favela nas periferias metropolitanas. É ser parte de uma comunidade ligada a um lugar específico, ou seja, é integrar um ‘povo’. [...] O indígena olha para baixo, para a Terra a que é imanente; ele tira sua força do chão. O cidadão olha para cima, para o Espírito encarnado sob a forma de um Estado transcendente; ele recebe seus direitos do alto (Viveiros De Castro, 2017, p. 4).

O antropólogo afirma, ainda, que

A terra é o corpo dos índios, os índios são parte do corpo da Terra. A relação entre terra e corpo é crucial. A separação entre a comunidade e a terra tem como sua face paralela, sua sombra, a separação entre as pessoas e seus corpos, outra operação indispensável executada pelo Estado para criar populações administradas (Ibid, p. 8).

Os argumentos apresentados permitem pensar na relevância das terras – demarcadas e resguardadas para usufruto exclusivo – para os povos indígenas. Para estas coletividades, o vínculo com a terra não é de propriedade, isso porque ela é “o corpo” dos indígenas e com ela possuem uma relação constitutiva, imanente. Do ponto de vista jurídico, os territórios indígenas são “bens da União”, e também nesse sentido não



pertencem aos povos indígenas, mas são a eles destinadas, como direito imemorial, inalienável, imprescritível, e elas são indisponíveis para qualquer outro fim. Não se trata, assim, de uma relação de propriedade, tampouco de uma relação que permitiria exploração exaustiva de recursos, pelos próprios indígenas ou por terceiros.

Sobre as lutas políticas nos dias atuais, Brighenti (2010, p.19) afirma que, no âmago das disputas, está a questão territorial, que para os indígenas diz respeito ao direito coletivo de posse e, sob o ponto de vista do direito individual, trata-se de um direito de propriedade.

Disputas em torno do sentido de produção e desenvolvimento

Em março de 2019, em discurso durante a 40ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, já mencionada na seção anterior, o indígena Avanilson Karajá criticou as políticas indigenistas adotadas pelo governo Bolsonaro. Ele denunciou os discursos de ódio contra os povos indígenas, proferidos pelo governo, e a depreciação de seus modos de vida.⁵

Em nota, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRN, repudia os ataques de Jair Bolsonaro aos povos indígenas. Em especial, rebate a afirmativa de que tais povos seriam massa de manobra que inviabilizaria o progresso, e que a demarcação de terras indígenas, áreas de proteção ambiental, quilombolas, parques nacionais levaria à insolvência do Brasil. Diz a nota:

O presidente da República, Jair Bolsonaro, mais uma vez volta a atacar os povos indígenas e a Constituição Federal ao questionar nosso direito ao território como povos originários do Brasil. Se não bastasse envergonhar o Brasil mundialmente com suas falas preconceituosas e mentiras em relação às queimadas na Amazônia, agora acusa os povos indígenas de inviabilizarem o Brasil. Diante de afirmações tão grotescas, repercutidas pela mídia nacional, nós povos indígenas do Rio Negro, representados pela Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), demonstramos nossa indignação e repúdio a tais afirmações caluniosas. E completamos: o que inviabiliza o Brasil é a violência, a corrupção, o Estado paralelo promovido pelas milícias que dominam parte das grandes cidades do país e a falta de investimento em educação, saúde, cultura, esporte e infraestrutura⁶.

Em 28 de agosto de 2019 ocorreu uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na qual os indígenas repudiaram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 187, que visa possibilitar a exploração econômica em terras



indígenas. Neste evento, Rogério Xukuru Kariri assim se expressou: “A questão é que o conceito de produção que a gente tem é diferente do conceito de produção do latifúndio. Nós temos uma concepção diferente [...] Precisamos entender que os povos indígenas não são entraves ao progresso. Tudo que se tem numa sociedade não indígena, na indígena também tem. Eu acho que não é nada de mais ser respeitado por isso”.

Os recortes anteriores dão conta de disputas em torno do sentido de desenvolvimento. Os indígenas recusam as afirmativas de que seus modos de vida inviabilizariam a economia nacional. Propagam-se, na esteira dos pronunciamentos governamentais, velhas assertivas de que “há muita terra para pouco índio”. Bolsonaro alia a este argumento, o de que os indígenas desejariam muito mais os benefícios das tecnologias e da assistência do que a demarcação de suas terras. No site Justificando, em 15 de setembro de 2019, Carlos Eduardo Araújo destaca uma afirmativa do presidente Bolsonaro, de que são contra a expansão econômica utilizam os indígenas como massa de manobra. Os mais emblemático pronunciamentos têm se dado em redes sociais em que o presidente salienta que sua gestão será marcada pelo objetivo de “integrar estes cidadãos” à comunhão nacional. Disse o presidente na rede social, Twitter, em 15 de janeiro de 2019, que “mais de 15% do território nacional é demarcado como terras indígenas e quilombolas. Menos de um milhão de pessoas vivem nesses lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por Ongs. Vamos juntos integrar esses cidadãos e valorizar todos os brasileiros”⁷.



No Portal de notícias UOL, em 06 de agosto de 2019 noticiam-se falas do presidente Jair Bolsonaro à imprensa, relativas aos dados sobre desmatamento da Amazônia. Ele defende que questões como o licenciamento ambiental deveriam ser de responsabilidade dos estados, citando como exemplo o estado de Roraima: “Se eu



fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. Lá tem tudo. Mas 60% está inviabilizado por reservas indígenas e outras questões ambientais.”

Uma crítica ao viés integracionista do governo é apresentada pela Sexta Câmara do MPF⁸, quando fala da Medida Provisória editada por Bolsonaro, Seu teor promove a restauração “da velha política integracionista” e “viola as peculiaridades culturais e direitos constitucionais” dos povos indígenas. Defende a Nota Técnica que “O índio não deve e não necessita ser integrado à sociedade brasileira, pois dela já faz parte desde sua gênese”. Segundo o texto, qualquer medida que promova o retorno da política indigenista integracionista vai contra a Constituição. Vale ressaltar, por fim, que várias pesquisas contemporâneas comprovam que as terras demarcadas estão entre as mais bem preservadas, o que mostra que os modos de vida indígenas não são obstáculos ao desenvolvimento, mas formas de manutenção da vida presente e futura.

A Constituição Federal em 1988 rompe com a perspectiva estatal da aculturação, cuja premissa era a assimilação indígena ao modo de ser da população majoritária. As transformações do direito ou das relações entre o Estado e os povos indígenas pode ser assim explicitadas:

A Constituição de 1988 reconhece aos índios o direito de ser índio, de manter-se como índio, com sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Além disso, reconhece o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Esta concepção é nova, e juridicamente revolucionária, porque rompe com a repetida visão integracionista. A partir de 5 de outubro de 1988, o índio, no Brasil, tem direito de ser índio (Souza Filho, 2010, p. 106-107).

O reconhecimento destes direitos no texto constitucional consolida garantias individuais e coletivas de todos os povos, base essencial de qualquer direito humano. As análises realizadas neste estudo mostram que alguns discursos proferidos por governantes no Brasil contemporâneo são mobilizados, de maneira especial, por disputas em torno de recursos ambientais, minerais e territoriais, resguardados aos povos indígenas por meio de um dispositivo constitucional, mas intensamente disputados para expansão da produção agropecuária.

A análise evidenciou, ainda, que estão em disputa os sentidos da terra, vista, por um lado, como recurso de vida, destinada à posse indígena e sob proteção da União e, por outro lado, como recurso para exploração e expansão do agronegócio, sob a forma da propriedade privada. Mostrou, ainda, o ressurgimento de discursos governamentais



integracionistas, comuns no período ditatorial brasileiro, por meio dos quais se vislumbra a dissolução das diferenças e a inserção indígena na lógica de vida colonial, moderna e ocidental. Os movimentos indígenas, por sua vez, defendem o respeito aos seus modos ancestrais de pensar e de viver.

Notas

¹ Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-defende-comercio-de-pistola-50-para-evitar-condenacao-de-policiais,70002035196>. Acesso em: 12 de maio de 2019.

² <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/575956-nem-um-centimetro-a-mais-para-terras-indigenas-diz-bolsonaro>

³ Site do Conselho Indigenista Missionário – Cimi, organismo vinculado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) que há 45 anos atua em defesa dos direitos dos povos indígenas do Brasil. Criado em 1972, no auge da Ditadura Militar, quando o Estado brasileiro adotava como centrais os grandes projetos de infraestrutura e assumia abertamente a integração dos povos indígenas à sociedade majoritária como perspectiva única, o Cimi procurou favorecer a articulação entre aldeias e povos, promovendo as grandes assembleias indígenas, onde se desenharam os primeiros contornos da luta pela garantia do direito à diversidade cultural.

⁴ <http://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/28603-bancada-do-psl-se-igualaa-do-pt-na-camara-dos-deputados>

⁵ <https://cimi.org.br/2019/03/onu-indigena-critica-politica-integracionista-bolsonaro/>

⁶ <https://foirn.blog/2019/08/27/nota-publica-da-foirn-sobre-declaracoes-do-presidente-jair-bolsonaro/>

⁷ <https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1080468589298229253>

⁸ Nota Técnica Nº 1/2019-6ªCCR

Referências

Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 out. 1998. Disponível em: < <https://bit.ly/3pS6SQf> >.

Acesso em: 10 de maio de 2019.

Brighenti, Clovis Antonio. Estrangeiros na Própria Terra: Presença Guarani e Estados Nacionais. Chapecó/Florianópolis: Argos/edufsc, 2010.

Cioccari, D., & Persichetti, S. (2018). Armas, ódio, medo e espetáculo em Jair Bolsonaro. *Revista Alterjor*, 18(2), 201-214.



Schäfer, Gilberto; Leivas, Paulo Gilberto C.; Santos, Rodrigo Hamilton. Discurso de ódio: da abordagem conceitual ao discurso parlamentar. RIL Brasília a. 52 n. 207 jul./set. 2015 p. 143-158

Silva, Rosane Leal da et al. Discurso do ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira. Rev. Direito GV, São Paulo, v.7, n. 2, p. 445-467, jul./dez. 2011.

Souza Filho, Carlos Frederico Marés de. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito. 1ª Ed. (ano 1998), 7ª reimpressão (ano de 2010). Curitiba: Juruá, 2010. p. 106/107.

Viveiros De Castro, Eduardo. Os involuntários da Pátria. Elogio do subdesenvolvimento. Edições Chão da Feira Caderno de Leituras, n. 65, Maio de 2017. Disponível em: <https://chaodafeira.com/catalogo/caderno-n-65-os-involuntarios-da-patria/>



Trajetórias de uma distopia: os grupos conservadores e sua agenda política das jornadas de junho de 2013 até 2018.

Fernando Antonio da Costa Vieira
Afranio de Oliveira Silva

Resumo

O presente trabalho terá como eixo central a análise do processo que consolidou a atuação de grupos conservadores, como por exemplo, o MBL (Movimento Brasil Livre), o Vem Pra Rua, entre outros e sua ação política após as chamadas “Jornadas de Junho”, evento que galvanizou a sociedade brasileira em 2013.

Estes diversos movimentos, ocuparam as manifestações de Junho de 2013, rompendo com a demanda inicial do movimento, a implementação do Passe Livre nos transportes públicos e, incorporando uma agenda moralista e conservadora pautada no combate à corrupção e no questionamento aos partidos de esquerdas, em especial, o PT.

Após 2013, os movimentos vivenciaram um refluxo com a reeleição de Dilma Rousseff em 2014. No entanto, cooptados e financiados por partidos conservadores, como o DEM e o PSDB, além de financiados por organizações *Think Tanks* - defensoras de um ultraliberalismo e contrária a governos progressistas, movimentos sociais progressistas e sindicatos – os movimentos voltaram a ter força e atuaram desde 2015 para inviabilizar nas ruas o governo Dilma e viabilizar o processo de impedimento da presidenta em 2016.

Fortalecidos e com apoio ampliado, passaram a atuar em parceria com o candidato vitorioso nas eleições de 2018 para presidente da república.

Se apresentam como movimentos sociais autônomos, ainda que não sejam, e se dizem representar valores tradicionais ameaçados por governos de esquerda. Apoiam um conjunto de pautas moralistas, tais como, a total interdição do aborto, a repressão a movimentos sociais, a ruptura com políticas que impliquem em fortalecer a igualdade de gênero, entre outros pontos.

O presente trabalho irá analisar a produção documental destes movimentos, sua interpretação sobre o Brasil atual, sua percepção pela mídia e sua eficácia enquanto movimento social organizado.

O emprego da análise de discurso será central para a compreensão do efetivo projeto defendido pelos grupos analisados.

Serão analisados especificamente dois grupos, os mais significativos no momento: MBL e vem Pra Rua.



Palavras chave

MBL; Movimentos organizados; Vem Pra Rua; Conservadorismo

Abstract

The present work has as a central axis the analysis process that consolidated the actions of conservative groups, as for example, the MBL (Movimento Brasil Livre), the Vem Pra Rua, among others, and their political action after the so-called "Days of June," an event that galvanized the Brazilian society in 2013. These various movements, occupied the demonstrations in June of 2013, breaking with the initial demand of the movement, the implementation of a free pass for public transport and, incorporating a moralistic and conservative agenda based on combating corruption and the questioning of the left parties, in particular, the PT. After 2013, the movements experienced a reflux with the election of Dilma Rousseff in 2014. However, co-opted and financed by conservative parties, such as the DEM and the PSDB, in addition to funded by organizations Think Tanks - defenders of liberalism and contrary to progressive governments, progressive social movements and trade unions - movements returned to have strength and acted since 2015 to derail the streets the government Dilma and facilitate the process of impediment of the president in 2016. Strengthened and expanded support, began to act in partnership with the victorious candidate in the elections of 2018 for President of the republic. Present themselves as autonomous social movements, even if they are not, and if say represent traditional values threatened by governments of the left. Support a set of moralistic tariffs, such as the total prohibition of abortion, the repression of social movements, the rupture with policies involving to strengthen gender equality, among other points. The present study will analyze the documental production of these movements, their interpretation of the Brazil Current, their perception by the media and its effectiveness as a social movement organized. The employment of discourse analysis will be central to the understanding of the actual project advocated by the groups analyzed. Will be specifically analyzed two groups, the most significant at the moment: MBL and Vem Pra Rua.

Key words

MBL; Organized movements; Vem Pra Rua; Conservatism.

Introdução

Em 2013, o Brasil foi marcado pela eclosão de um conjunto de movimentos díspares que tomaram as ruas e que se convencionou designar de Jornadas de Junho. A



novidade do período foi o deslocamento de sua atuação que se iniciou organizado pelo Movimento Passe Livre (MPL), criado em Porto Alegre em 2005 e, defensor de uma nova política para os transportes públicos baseada na defesa da tarifa zero, em especial para os estudantes que deveriam receber passe livre. Entretanto, as jornadas foram incorporadas por outros atores sociais, em parte oriundos da classe média e que passaram a defender medidas moralizantes na política associando os governos petistas à corrupção.

O ingresso desses atores sociais que antes não assumiam, como estratégia, a ação nas ruas, trouxe uma nova perspectiva política para o país. Com uma pauta conservadora, assumiram uma oposição aos governos petistas e um forte discurso contrário às políticas inclusivas destes governos. Além disso, passaram a ocupar um espaço então considerado como lócus de ação da esquerda construindo uma nova narrativa que expressava sua visão de mundo.

Maria da Glória Gohn, vai assinalar que

inúmeros integrantes das manifestações não se identificavam com movimentos sociais, usualmente se autodenominam pertencentes a coletivos. Não tem liderança, mas todos são líderes. Autoproduzem imagens com discursos sem referências a tempos do passado, como se não tivessem outras memórias incorporadas além de si próprios. São grupos diferenciados internamente; são fragmentados (Gohn. 2017. P. 27).

A leitura de Maria da Glória Gohn, nos permite perceber os grupos conservadores que surgem no país após 2013, sob a ótica da influência do libertarianismo. Não que esta venha a ser a única vertente. No Brasil e em outros países da América Latina, assistiu-se ao crescimento de grupos fundamentalistas religiosos, em sua maioria, de vertente evangélica, descompromissada com a questão democrática e defensora de políticas autoritárias que contenham os avanços culturais dos últimos anos, no que tange o papel da mulher, o debate acerca do gênero, os direitos das minorias LGBTQ, entre outros pontos.

Explicitando essa postura, surgiu no Rio de Janeiro, um culto que assume o repúdio à democracia, aos valores difundidos pela Declaração dos Direitos do Homem. É a chamada Igreja Geração Jesus Cristo. Liderada pelo pastor Tupirani da hora Lores, se notabilizou pelo lema “Bíblia sim, Constituição não”, onde defende a prevalência das leis bíblicas em detrimento daquelas feitas pela sociedade. Também prega a explícita perseguição a todos os que não seguem sua pregação, em especial, judeus e seguidores dos cultos afro-brasileiros.



Além deles, também assistimos ao ressurgimento de defensores da ditadura militar brasileira que reciclaram e deram nova roupagem ao anticomunismo. Nessa lógica, os movimentos feministas, ambientalistas, antirracistas e o Partido do Trabalhadores (PT) se inserem no conceito de comunistas a serem combatidos.

No entanto, nosso artigo dará ênfase aos grupos conservadores que surgiram após 2013 e com uma pauta centrada, centralmente, na defesa da saída do PT do poder.

O conservadorismo como ideologia

Para entender o Brasil atual é necessário entender uma das palavras mais ditas e relacionadas à disputa no campo da política nacional: conservadorismo. Menos como uma receita dos métodos científicos e procedimentos acadêmicos consagrados é preciso “começar pelo começo”, buscando o que a palavra representou no passado e em especial em sua origem. Portanto, menos como um receituário acadêmico e mais pela necessidade de compreensão de uma conjuntura de obscurantismo e anti-intelectualíssimo, que alicerçada sobre uma infinidade de ideias propagadas por inúmeros movimentos de direita, inclusive pelo próprio chefe do poder executivo nacional no Brasil, é que se deve refletir sobre essas ideias que povoam o imaginário da população e que se transformou em cartilha política da classe média brasileira. Não existe espaço físico ou virtual em que essas ideias conservadoras não são mobilizadas para atacar os avanços do Estado Providência, os movimentos sociais progressistas e os partidos de esquerda. No campo das lutas das ideias, sem obviamente desprezar a luta real, ocorre uma alteração importante nos últimos anos devido ao desenvolvimento as tecnologias da informação e comunicação, entendidas por alguns intelectuais como uma nova forma de guerra: a guerra híbrida.

É no campo dessa nova conjuntura que a análise da origem e seus princípios tem a maior relevância, pois no campo de disputa das ideias a semântica e hermenêutica é que a pensamento hegemônico tem ganhado as últimas batalhas. O avanço do neoliberalismo tem se utilizado de estratégias das mais variadas para a expansão do capital, mas essa última trincheira tem feito uso de discursos fundamentados do conservadorismo, mas como todos os discursos, no atual contexto as denúncias efetuadas pelo campo da esquerda não tem sido suficiente para desmascarar seus princípios centrais e suas consequências deletérias para a política e para a democracia.

No campo conservador, as ideias conservadoras não são relacionadas aos seus principais aspectos desagregadores e preconceituosos, mas são transformados no nível do discurso em uma possibilidade de volta a uma tradição seletiva e com uma boa dose



do nosso “racismo cordial”. Portanto, como as relações de classe e raciais no Brasil, possuem uma grande interseção, os ataques dos setores conservadores devem, para dar conta dessa “confortável amnésia”, ser suavizados e disfarçados para conseguir operar em nível de discurso de massa.

Identifica-se nos últimos anos, com mais frequência, pelos inúmeros discursos do atual presidente da república e por infinitos postagens nas redes sociais que essa suavização é abandonada dando lugar a cenas explícitas de violência, discriminação e preconceito por conta de alguns grupos de extrema direita. No entanto, como discurso oficial desses movimentos alguns princípios que sustentam todas ações discriminatórias e racistas são substituídas por um discurso fundamentado na tradição e religião. Mas como pretende-se nesse artigo, deixar-se-á claro os fundamentos e preconceitos aos quais está fundado o conservadorismo que esses movimentos de direita no Brasil representam.

A perspectiva dos conservadores como Edmund Burke sobre o papel da história é reduzida não é mais do que uma experiência. É na confiança nessa experiência mais do que no abstrato e no poder dedutivo sobre as relações sociais que o conservadorismo está fundamentado historicamente. Mas os conservadores, na sua simpatia pela tradição, são seletivos, isto é, não defendem qualquer ideia do passado. Assim, o conservadorismo também mantém uma defesa daquilo que é antigo e tradicional. Essa crença fortalece a ideia de que mesmo uma estrutura obsoleta possa ter uma função progressiva e ainda vital, de que o homem tira proveito psicológica ou sociologicamente.

No campo econômico por exemplo, a ideologia amplamente utilizada para difundir os ideais conservadores são os neoliberais ou ultraliberais. Não é o espaço neste artigo para expor as contradições dessa ideologia, mas o de entender como um discurso fundamentado no liberalismo serve ao propósito de inflar um discurso conservador. Como destaca Miguel (2006), os ultraliberais denunciam a democracia por sua inferioridade como forma de alocação de recursos.

A democracia neste caso também seria um obstáculo ao exercício da liberdade individual na medida que as decisões em um regime democrático são impostas a todos, mesmo aos que discordam dela. Em sua versão mais clássica, a democracia na vertente liberal de Schumpeter, nada mais é que do que uma fórmula para formar governos. Uma versão minimalista da democracia onde o cidadão mediano é ignorante e sua principal questão é formar um governo para o povo, não do povo. Essa e outras defesas da



ineficiência da democracia à coloca em xeque como solução para as tomadas de decisão e como fórmula para a redução das desigualdades e injustiças sociais, colocando em risco o estado democrático de direito em um contexto historicamente de inúmeros golpes para implantação das ditaduras civil-militares na América Latina.

Ainda no campo político, o conservadorismo expõe sua preferência à ordem e à autoridade em detrimento à liberdade. Não existe liberdade senão ligada à ordem. Para o pensamento conservador o principal requisito de uma sociedade é que existam meios para reprimir as paixões dos indivíduos. Assim, as instituições do Estado devem estar sempre à disposição das elites para que a vontade dos cidadãos possa ser contrariada e controlada e as suas paixões subjugadas.

No campo cultural e social, as ideias conservadoras são também desastrosas para sociedade. Nessa perspectiva o preconceito é a essência de toda uma maneira de conhecer a realidade. Burke assumia essa tese como maneira de se opor ao espírito iluminista da Revolução Francesa. O preconceito (ou senso comum) como forma de compreender a realidade, seria a melhor maneira de lidar com os problemas da vida cotidiana e a racionalidade proposta na Revolução obscureceria a verdade consagrada pela tradição e pela experiência. Os indivíduos precisam, para se educarem e desenvolverem, de um tipo de raciocínio que derive de sentimentos, emoções e longa experiência. Assim, o preconceito seria, na mente individual, um resumo da autoridade e da sabedoria contidas na tradição. Com base nessas ideias está pronto o campo político do conservadorismo para iniciar sua luta contra qualquer discurso intelectual. Não é coincidência que uma das instituições mais atacadas antes e pós golpe é a universidade pública. Acusada de todo tipo de crime, desde lugar doutrinação ideológica até produtora de drogas, a universidade pública está no centro de disputa do setor conservador.

É necessário não só produzir um discurso conservador utilizando-se de todos os artifícios, em especial mentiras, mas destruir qualquer possibilidade de contra-ataque que desminta essas ideias. Daí os ataques às universidades que podem produzir um conhecimento científico capaz de derrubar os discursos produzidos por esse setor conservador da sociedade da qual faz parte, por exemplo, o movimento antivacina.

Portanto, não tenhamos pudor em fazer a crítica aos movimentos de extrema direita como autoritários, preconceituosos e injustos, pois as ideias aos quais estão intimamente ligados são ideologias largamente utilizadas na história por movimentos golpistas e fascistas na Europa e América Latina.



Os grupos conservadores

A proposta deste trabalho é analisar dois dos mais significativos grupos que surgiram após 2013: o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua.

O MBL se apresenta como seguidor das ideias do libertarianismo, isto é, da corrente defensora de uma visão ultraliberal que rejeita qualquer ingerência do Estado nas relações sociais. Para essa corrente, o ideal de liberdade se apresenta como a capacidade autônoma individual para agir livremente no mercado.

A defesa da propriedade privada como eixo central, a crença que cabe aos indivíduos escolherem os rumos a serem seguidos por si, a condenação a qualquer interferência estatal no tecido social, marcam os valores do movimento.

Nesse sentido, como aponta Luis Felipe Miguel, o libertarianismo

reduz todos os direitos ao direito de propriedade e tem ojeriza por qualquer laço de solidariedade social. Para liberais de correntes mais canônicas, não seria uma doutrina liberal e sim de caráter neofeudal (Miguel. 2019. P. 95).

O caráter neofeudal estaria vinculado a uma crença na qual as relações sociais se estruturariam em torno de contratos privados. (Miguel. 2019. P. 95). Ora, dessa forma a atuação do Estado no fornecimento de serviços básicos à sociedade, tais como, saúde, educação, previdência social, entre outros pontos, passou a ser visto como uma intervenção estatal na livre sociedade, beneficiando os atores sociais que não tiveram a devida competência para, através de suas ações individuais, dispor de uma situação econômica que lhes permitisse partilhar desses serviços privados.

Nesse sentido, o Movimento Brasil Livre (MBL) se identifica com tais valores. Nascido em novembro de 2014, sediado em São Paulo, o movimento apresentou como bandeira inicial a crítica aos governos petistas, acusados de corrupção e de promoverem o aparelhamento do Estado brasileiro. Defendiam a adoção de ideias e valores liberais, reduzindo o Estado ao mínimo, mediante a privatização dos serviços públicos.

Na educação, por exemplo, o MBL apresenta as seguintes propostas:

Implementação do sistema de vouchers para ensino básico, fundamental, médio e superior, com valor igual para todos os alunos de cada nível. Complemento separado para alunos com deficiência.

Legalização do homeschooling.



Apresentação do Projeto de Lei “Escola sem Partido” em legislativos estaduais e municipais.

Benefícios fiscais para pessoas físicas e jurídicas que custeiem educação de crianças e jovens de famílias que não podem pagar. Os municípios e/ou estados fariam o cadastramento das crianças.

Fica claro que para o MBL, a educação é um negócio privado com o Estado resumindo sua função a pagar o voucher para a escola privada e a fiscalização acerca dos financiamentos privados transformados em benefícios fiscais. Além disso, mostrando os limites autoritários da versão brasileira do liberalismo, defendem, a implementação do projeto Escola Sem Partido, pautando o cerceamento à liberdade de cátedra no país. A proposta parte do pressuposto que o avanço da esquerda no país é fruto da doutrinação marxista dos professores nas salas de aula. Combater a difusão do “marxismo cultural” gramsciano e controlar os professores é uma meta a ser efetivada.

Na economia, destacamos:

Idealmente, no longo prazo, todos os bancos devem ser privatizados, porém o mais urgente é privatizar a Caixa Econômica Federal.

Realizar a inserção plena da economia brasileira no comércio internacional, com maior abertura comercial e busca de acordos regionais de comércio em todas as áreas econômicas relevantes – Estados Unidos, União Europeia e Ásia. Revisão do capítulo econômico da Constituição (adotar a economia de mercado. Qualquer interferência do Estado deverá ser justificada e seus resultados, posteriormente avaliados).

A privatização dos bancos públicos, a crença de que o Brasil deve abrir seu mercado ao comércio globalizado, a não intervenção do Estado no mercado, a defesa da maior flexibilização do trabalho, explicitam o caráter ultraliberal do movimento.

Mas não há área que não fuja da leitura ultraliberal do MBL. Em sua página do facebook, a jovem sueca Greta Snaps que se notabilizou por cobrar reais atitudes políticas para combater a degradação ambiental é acusada de ser comunista. Mais de 200 comentários reproduzem a visão do movimento, condenando a jovem, acusando-a de ser esquerdista, além de ofensas à pessoa da jovem.

Nada estranho considerando que as propostas do MBL para o meio ambiente se apresentam como sustentabilidade e, entre outros pontos, apresentam como estratégia a importante leitura que assinalamos:

Privatizar ou transformar em PPPs os serviços de saneamento básico dos municípios.



Incentivos fiscais para atração de indústrias ecoeficientes, como para empresas e industriais fabricantes de tecnologia limpa.

Na prática, a preocupação do movimento é atrair empresas para o mercado nacional, com a questão ambiental se apresentando como secundária diante da prevalência do papel do mercado.

Atualmente, o MBL tem convocado – sem sucesso – sua militância para combater a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que em consonância com a Constituição de 1988, decidiu que no Brasil, a prisão somente será efetivada – exceto crimes hediondos ou com clara ameaça à integridade da sociedade, cabendo ao juiz decidir – após esgotados todos os recursos. Para o MBL, essa decisão apenas foi tomada para beneficiar o ex-presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.

Cabe ressaltar que o MBL conseguiu eleger deputados estaduais em diversos estados e o deputado federal Kim Kataguirí pelo Partido Democratas (DEM). Considerado inexperiente e isolado, não conseguiu o papel de liderança liberal que acreditou que teria.

O MBL é vinculado a grupos conservadores norte-americanos, destacando-se a Atlas Network, fundação fundada pelos irmãos Koch com a função de difundir valores liberais na economia e defender o capitalismo nos meios estudantis. O movimento estudantil, os Estudantes Pela Liberdade (EPL) se apresenta como o

braço brasileiro da Students for Liberty, organização internacional financiada pela Atlas e outras fundações similares, com orçamento na casa dos milhões de dólares. (Miguel, 2019, p. 95).

Em 2017, o jornal El País, publicou reportagem sobre a falta de transparência da organização no que tange a arrecadação e acusava o MBL de se transformar num negócio para um grupo de familiares ligados a um dos fundadores do movimento: Renan Santos. A falta de efetiva fiscalização sobre as contas do movimento permitiu a criação de uma OSCIP, a Renovação Liberal que sob argumento de ser entidade sem fins lucrativos, administra da forma que quer os recursos, canalizando-os para destinos nebulosos.

O movimento Vem Pra Rua surgiu em outubro de 2014. Seus fundadores são dois empresários no ramo de consultoria em comunicação e no mercado financeiro, Rogério Chequer e Collin Butterfield. O VPR se apresenta como continuidade dos movimentos de 2013, catalisando a indignação contra a corrupção na política nacional. Cabe realçar,



que o mote que uniformiza o movimento é o combate ao PT, visto como fonte da corrupção na política nacional.

A estratégia mobilizadora do movimento se deu mediante o emprego das redes sociais, convocando os simpatizantes para rua junto aos atos que o movimento integrava. Nos cartazes erguidos pelos manifestantes se encontrava o “Fora PT”, “Contra o Petrolão”, o “Tchau Querida” e pedidos de intervenção militar no país.

O movimento, assim como o MBL assume uma defesa de um mercado ultraliberal. Em seu Manifesto publicado na rede, lemos que o Brasil sonhado pelo VPR seria aquele:

onde a liberdade econômica é estimulada e o Estado não é maior que o necessário, a fim de que o empreendedorismo e a livre iniciativa gerem riquezas e oportunidades para todos.

Além disso, o movimento apresenta um conjunto de propostas extremamente vago onde pontua a transparência e o combate à corrupção pública. Além disso, criaram, um projeto que denominaram Frente de Renovação que se propõe formar novos quadros para o Congresso que sejam

sejam íntegros e comprometidos com uma agenda pública e centro-liberal de renovação focada em justiça, integridade, sustentabilidade e democracia.

Um conjunto de propostas pouco claras, mas com capacidade de agregar os setores, principalmente, de classe média com baixa politização e um forte sentido moralista.

Assim como o MBL, o VPR se posicionou em defesa da prisão em Segunda Instância. Sua página no facebook é marcada por inúmeras postagens em defesa da prisão em segunda instância e na cobrança para que deputados e senadores façam uma Proposta de Emenda Constitucional garantindo a mesma.

Diferente de 2015 e 2016, o movimento não encontrou eco para a divulgação de seus atos mais recentes. Com isso, o que se viu foi uma diluição de sua capacidade de influenciar os parlamentares ante a baixa adesão ao VPR.

Cabe realçar, que a defesa da prisão em segunda instância somente passou a fazer parte da bandeira dos movimentos de direita ao beneficiar o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva. A bandeira dos dois movimentos é muito mais uma posição ideológica de condenação aos partidos e lideranças de esquerda, do que uma efetiva defesa de um compromisso com a moralidade pública.



Conclusão

O período caracterizado pelos governos petistas (2003-2016) representou uma virada na política brasileira. Ao mesmo tempo em que mantinha uma política conciliatória que incorporava os partidos tradicionais e a maior parte das elites econômicas ao seu lado, foram adotadas medidas inclusivas que reduziram as desigualdades sociais e incorporaram ao mercado grande parcela de brasileiros.

Essas políticas resultaram num mal-estar, o que Jessé Souza chamou de ressentimento, no qual os setores que consideravam os bens públicos como bens privados, passaram a se posicionar contra os governos petistas.

O combate à corrupção foi o mecanismo político utilizado para desgastar o governo e mobilizar a sociedade. Estimulados pela mídia, o macarthismo brasileiro contra a esquerda encontrou ampla e parcial cobertura midiática. Nesse contexto, surgiram novos movimentos que buscaram catalisar os anseios da classe média e imprimir nos debates a defesa de sua agenda ultraliberal.

Tanto o MBL quanto o VPR defender a plena liberdade de ação no mercado, total desregulamentação dos mecanismos de controle econômicos, o estímulo à iniciativa privada, disfarçada com o novo mote do empreendedorismo. No entanto, veem a política como um campo a ser controlado, em especial, limitando a atuação dos movimentos populares, dos sindicatos, dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda, vistos como estruturas arcaicas incapazes e perceber a modernidade e se adequar ao mundo da selvagem competição meritocrática.

Os governos petistas ao ampliarem o papel do Estado, ao buscarem políticas inclusivas junto às camadas populares, provocaram inchaço da máquina pública e perderam o controle sobre a fiscalização. Resultou disso a “generalizada” corrupção, até então “não vista” no país. O emprego das redes sociais, permitiu uma maior difusão dessas ideias construindo um olhar de mundo que se tornou vitorioso em 2016.

Bibliografia

Constant, Benjamin. Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos. Trad. Loura Silveira. In: Filosofia Política 2. Porto Alegre: L&PM, 1985.

Gohn, Maria da Gloria. Manifestações e protestos no Brasil. Correntes e contracorrentes na atualidade. SP: Cortez, 2017.

Mannheim, Karl, “O pensamento conservador” in José de Sousa Martins. *Introdução crítica à sociologia rural*. São Paulo: HUCITEC, 1986.



Miguel, Luis Felipe. Utopia do pós-socialismo. Esboços e projetos de reorganização radical da sociedade. Revista Brasileira de Ciências Sociais - vol. 21 nº. 61, 2006.

_____. O colapso da democracia no Brasil. Da Constituição ao golpe de 2016. SP: Expressão popular. 2019.

Nisbet, Robert A. O conservadorismo. Lisboa: Editorial Estampa, 1987.

Rocha, Camila e SOLANO, Esther. As direitas nas redes e nas ruas. A crise política no Brasil. SP: Expressão popular, 2019.

Souza, Jessé. A radiografia do golpe: entenda como e por que você foi enganado. SP: Leya, 2016.

Vianna, Luiz Werneck. “O americanismo em Tocqueville”, in *A Revolução Passiva - iberismo e americanismo no Brasil*. Rio de Janeiro: Revan, 1997.



Uso das mídias sociais pela direita brasileira: A defesa do Escola Sem Partido no Facebook e Instagram¹.

Ricardo Gonçalves Severo²
Suzane da Rocha Vieira Gonçalves³
Rodrigo Duque Estrada Campos⁴

Resumo

O artigo discute o modo como o pensamento conservador vem sendo difundido por meio das redes sociais a partir dos apoiadores do Movimento Escola Sem Partido. Partimos da análise das mídias sociais Facebook e Instagram, procurando verificar quem são os apoiadores do ESP e o modo como seu discurso se estrutura nas mídias sociais. Apontamos quem são os proponentes e defensores do ESP, bem como que esta proposta não é apartidária, pois possui fortes vínculos com grupos reacionários com projeto de poder. Além disso, verificamos que os apoiadores do ESP atuam de maneira militante nas mídias sociais, difundindo abertamente valores conservadores, em especial contra o debate de gênero.

Palavras chave

Escola sem Partido; Conservadorismo; Mídias sociais.

Abstract

This article discusses how conservative thought has been widespread through social networks from supporters of the Movement “Escola sem Partido” (ESP, School Without Partisanship). We start with the analysis of the social medias Facebook and Instagram, seeking to verify who are the supporters of the ESP and the way in which their discourse is structured in social networks. The analysis carried out indicates who the proponents and supporters of ESP are, and states that this proposal is not non-partisan because it has strong links with reactionary groups who seeks to gain power. In addition to that, we find that ESP supporters act militantly in social media, openly disseminating conservative values, especially against debates on gender.

Keywords

School without Partisanship Social Movement; Conservatism, Social media.

Introdução

Pesquisas realizadas sobre o Escola Sem Partido (ESP) caracterizam seus proponentes como conservadores, partindo da observação da composição do grupo, sua forma de



atuação e propostas defendidas (Frigotto, 2017); a vigilância e criminalização de educadores, a atuação para aprovação de projetos de lei em cidades e estados (Carvalho, Polizel e Maio, 2016); sua presença em debates e a pressão exercida na elaboração da Base Nacional Curricular Comum, que já vinha com uma pauta caracteristicamente neoliberal (Macedo, 2017).

Os proponentes do ESP caracterizam-se pela defesa de pautas reacionárias, em especial no que se refere aos temas sobre diversidade, à perseguição de partidos de esquerda, centrando-se em especial na pauta de gênero, demonizando propostas que buscam trazer à escola o papel da tolerância e diversidade, tratando-as como “propaganda LGBT” ou “kit gay” nos materiais de combate à homofobia, transfobia e lesbofobia, e criando, ademais, uma narrativa de que os (as) professores (as) são “doutrinadores” (César e Duarte, 2017; Moura e Salles, 2018). De modo geral, buscam o controle daquilo que é “transmitido” no ambiente escolar, considerando que os conhecimentos que não sejam instrumentais, num sentido capitalista de formação de mão-de-obra, são meramente uma forma de doutrinação.

Considerando que vivemos num contexto da propagação da cultura digital, em que há disponibilidade de informação, alterando o papel social e educativo da memória, a adoção de uma perspectiva considerada “neutra” é, de fato, a-histórica. Gera formas de interpretação preconceituosa, pois tende a tornar absolutas premissas que são tidas como ideais por uma interpretação que é, de fato, contextual e moral de um grupo e, portanto, a imposição de um papel aos professores de meros “transmissores” de informações é tanto retrógrado quanto inviável. Trata-se da produção de um entendimento sobre a realidade de forma estereotipada, a qual é facilitada, em parte, por uma visão alienada e não contextual sobre o processo educativo como formação mediada por experiências contextuais diversas e emancipatórias (Zuin e Zuin, 2016). Tais visões de mundo são potencializadas pelas mídias sociais, que passam a ser utilizadas de modo a propagar diferentes concepções e, muitas vezes, entendimentos enviesados, os quais partem de redes sociais de apoio ao projeto e agem, conforme nossa hipótese, de forma militante, propagando material produzido pelos grupos de referência e, em especial, por quem percebem como representante de seus valores.

A partir destas considerações, buscamos contribuir no debate sobre o tema ao abordar qual o perfil dos apoiadores do ESP em mídias sociais, com objetivo de verificar se, de fato, são partidários de ideologias reacionárias. Assim, a pesquisa analisa as publicações nas mídias sociais *Instagram* e *Facebook* por parte apoiadores do



Movimento Escola Sem Partido (ESP) e identifica as características principais desta rede. Compreendemos que a análise das redes de apoio, do perfil dos apoiadores e do conteúdo apresentado possibilitará identificar empiricamente os grupos que sustentam uma *visão de mundo* conservadora, o que é possível verificar pelo conteúdo das publicações, considerando a forma como são veiculadas as mensagens, as principais pautas, contra quem se dirige e pelo formato da rede social que sustenta as mensagens, em especial as referências de quem são os símbolos do grupo, assim como seus antagonistas.

O artigo traz, na primeira parte, a compreensão do que é o pensamento conservador, como se articula com determinados contextos e sua relação com grupos, bem como sua constituição enquanto *visão de mundo*. Em seguida, apresenta-se a proposta do ESP, seus principais proponentes e formas de atuação contemporâneas. Na última seção, apresentamos a metodologia de análise em mídias sociais, considerando o *Facebook* e o *Instagram*⁵, o formato das redes e os principais conteúdos e pautas veiculadas. Na conclusão, retomamos o argumento desenvolvido no artigo com as principais considerações, propondo futuros direcionamentos de pesquisa.

Caminhos da Pesquisa em Redes Sociais

Partimos da análise de redes sociais com abordagem estrutural, a qual busca as conexões existentes em dado sistema social com base em variáveis diversas (neste caso, a autoidentificação ideológica, ou ainda, a rejeição à “esquerda”) e que criam, por sua vez, um *sistema de interdependências* (Lazega; Higgins, 2014) que é, também, variável, no que diz respeito à composição da rede. Tal abordagem compreende que é possível, em razão da constituição destas conexões, observar processos sociais e comportamentos que são típicos do grupo observado.

Neste sentido, é fundamental compreender que a internet é um espaço diverso que, em princípio, foi compreendido como ferramenta que consolidaria necessariamente uma esfera democrática pela possibilidade de acesso e compartilhamento de mensagens por parte do cidadão comum. No entanto, percebe-se, em diversas circunstâncias, mera reprodução de valores arraigados na sociedade, não sendo suficiente para a consolidação de um espírito democrático a mera possibilidade de troca de informações. Como bem nota Silveira:

A ideia de que a internet incentiva a participação, e que a participação é em si avançada e favorável às causas da justiça, liberdade e igualdade não se sustenta empiricamente. O que se observa nas redes é a prevalência do senso comum que muitas vezes carrega



a força das ideias capitalistas e a doutrina da mercantilização extrema (Silveira, 2015, p. 218,).

Assim, as mídias sociais oportunizam a difusão de pautas de diversos grupos, o que não resulta, necessariamente, na adoção de valores relacionados à liberdade, à pluralidade e, especialmente, de respeito à alteridade. A título de exemplo, uma pesquisa realizada no final de novembro de 2017⁶ pelo Instituto Datafolha constatou que apoiadores(as) do candidato à presidência Jair Bolsonaro são o grupo mais ativos nas mídias sociais. Daqueles que possuem contas no no *Facebook* e *Whatsapp* (87% e 93%, respectivamente), 40% e 43% costumam compartilhar notícias sobre o candidato nas suas redes.

A presente pesquisa foi produzida a partir de revisão bibliográfica sobre o significado do conservadorismo enquanto fenômeno social, em especial a partir da definição dada por Karl Mannheim (1986), e, a seguir, sobre o ESP como corporificação de valores desta ideologia, que se apresenta no vocabulário e signos apresentados por pessoas que passam a ser representantes dessa visão de mundo (Mills, 1963; Pilcher, 1994). A partir da possibilidade de visualização das redes que se estruturam em mídias sociais e, em especial, considerando os perfis que são referência, podemos “localizar um pensador entre as coordenadas políticas e sociais ao averiguar que palavras seu vocabulário contém e que nuances de significado e valores eles incorporam” (Mills, 1963, p. 434).

A partir da análise das redes de apoio a este projeto no *Facebook* e *Instagram*, identificamos quais valores são transmitidos e que adversários são definidos para defesa de seus valores. Para o *Facebook*, analisamos as páginas que apoiam o ESP⁷ e com quais outras estão conectadas (menção a outras páginas), considerando para a apresentação do tamanho no grafo o grau de entrada e levando em conta, ainda, o número de curtidas (em dezembro de 2017).

A seguir, analisamos a formação de redes de apoio no *Instagram*, observando em especial o perfil dos principais atores. Mensuramos os dados considerando, da mesma forma, o grau de entrada para a identificação de quem são, em razão de menções, comentários e compartilhamentos, o que é verificável pelo tamanho do nó, as representações sobre o ESP e, conseqüentemente, conforme observado, os “intelectuais” conservadores. Nesta mídia, diferentemente do *Facebook*, foi possível fazer a análise da rede com base nos perfis e não em páginas.



O Interface da Programação de Aplicativos (API⁸) da mídia social *Facebook* apresenta uma série de restrições para a análise da formação das redes (Recuero, Bastos e Zago, 2015), além das recentes mudanças de compartilhamento que restringem a propagação de algumas publicações e dificultam a análise, em especial, da difusão de pautas políticas. Assim, procedeu-se à análise exclusiva nesta plataforma da existência de páginas (verificadas num total de 104) sobre o projeto Escola sem Partido e suas redes. Para esta mídia, procedeu-se à pesquisa no *netvizz*⁹, ferramenta que permite identificar em planilhas, entre outros dados, as páginas existentes sobre o tema desejado.

Para a realização da análise no Instagram, definiu-se a busca da *hashtag* #escolasempartido como elemento estrutural para identificação da configuração da rede:

Para se ter dados de rede, é preciso identificar pelo menos uma variável relacional ou “estrutural”, isto é, uma variável que possa relacionar todos os atores do sistema social estudado. [...] Uma vez assegurada a existência dessa variável estrutural, nos interessamos pelas variáveis mais clássicas, de nível individual que descrevem os atributos ou propriedades dos atores, como por exemplo, a idade, ou variáveis dependentes: comportamentos, desempenhos ou ainda suas representações (Lazega; Higgins, 2014, p. 17)

A análise dos atributos individuais dos nós (indivíduos) seria central, mas não é viável, devido tanto ao tamanho da rede quanto aos dados possíveis de se extrair pelos meios disponíveis de informação. Assim, partimos para a observação dos comportamentos e representações dos indivíduos da rede, o que é possível identificar pela lógica apresentada nas publicações e comentários feitos, em especial, como comentado acima, dos atores mais centrais das redes. A partir disto, poderemos compreender melhor quais valores partilhados pela rede de apoio ao ESP.

Uma das medidas utilizadas é a de centralidade, considerando que “o ator que ocupa a posição mais central num grafo é aquele que possui o maior número de conexões diretas com outros atores (Lemieux; Ouimet, 2008, p. 26).

A rede estudada do *Instagram* é composta, na maioria dos casos, por relações assimétricas, em que um nó se dirige a outro sem que haja correspondência. Esta conexão é constituída quando é feito comentário na publicação de um dos nós. No caso estudado, a rede gera grupos (*clusters*) relacionados a perfis que são centrais para a sua constituição, por representarem os valores que são expressos nas postagens por meio dos *hashtags*.



Ainda, é possível observar a criação de *clusters* que relacionam-se com perfis específicos, no caso, foi considerado o *grau do nó*, que trata da quantidade de conexões que produz, podendo ser o *grau de entrada* (conexões que este nó recebe), que serviu como métrica principal para nossa análise, e o *grau de saída* (conexões produzidas pelo nó) (Recuero, 2014, p. 71-72).

Apresentamos no gráfico sobre a rede no Instagram que mensura a modularidade (conjunto de clusters), que pode ser compreendida como comunidades definidas como “grupos de nós densamente interligados entre si e fragilmente conectados com o resto da rede” (Recuero, Bastos e Zago, 2015, p.

84) e, como pode se observar, como estas se constituem ao redor de perfis específicos, mensurados pelo grau de entrada.

Assim, para a análise da rede social de apoio ao ESP, procedeu-se à busca de dados no site *netlytic*¹⁰, que permite visualizar os comentários, as palavras mais empregadas e o desenho da rede. Utilizou-se para a pesquisa o termo *hashtag* #escolasempartido. A pesquisa no *Instagram* foi realizada com um recorte de comentários mensal, em razão do limite de 10.000 registros (considerando postagens, comentários, etc.) por arquivo para o uso gratuito do site. A coleta mensal (de outubro de 2017 a janeiro de 2018¹¹) nos permitiu exceder o número total de registros por busca sem perda de dados e agregá-los posteriormente para construção de gráfico no programa *Gephi*¹².

Pensamento Conservador em Desenvolvimento Recente no Brasil

Utilizamos nesta pesquisa o conceito desenvolvido por Karl Mannheim (1986) de *estilo de pensamento* para definir as formas como determinados grupos sociais agem socialmente. Estes estilos são constituídos pela participação em determinados espaços sociais, marcados por diferenças culturais, econômicas, políticas, entre outros, que levam à introjeção de formas específicas de compreender a realidade, gerando, portanto uma *visão de mundo*, a qual é transmitida desde a infância e reproduzida em diversos espaços sociais, e consolidam estruturas sociais que são dinâmicas em razão de embates entre as visões de mundo (Mannheim, 1986, p. 104).

Assim, estes estilos de pensamento estão relacionados a grupos sociais¹³, que sustentam e formam as visões de mundo que tem por base uma *intenção básica*, o que significa a motivação para a ação social e expressa os desejos dos grupos definidos por determinado estilo e que podem ser caracterizados pelas formas como transmitem suas ideias e formas de ação. Nesse sentido,



Do nosso ponto de vista, toda filosofia não é mais que uma elaboração mais profunda de um tipo de ação. Para compreender a filosofia deve-se compreender a natureza da ação que repousa em sua base. Essa “ação”, à qual nos referimos, é um caminho especial, peculiar a cada grupo, de penetrar a realidade, e ele toma sua forma mais tangível na política. O conflito político dá expressão aos objetivos e propósitos que operam de forma inconsciente, mas coerentemente, nas interpretações do mundo conscientes e meio-conscientes característicos do grupo (Mannheim, 1986, p. 89).

É preciso, portanto, para compreensão do estilo de pensamento conservador, identificar os seus grupos de sustentação, os valores que são comunicados e suas formas de ação, bem como sua *intenção básica*. Para Mannheim, o conservadorismo surge do tradicionalismo. São, no entanto, fenômenos distintos.

O tradicionalismo é essencialmente uma dessas inclinações ocultas que cada indivíduo inconscientemente abriga dentro de si mesmo. O conservadorismo, por outro lado, é consciente e reflexivo desde o princípio, na medida em que surge como um contramovimento em oposição ao movimento progressista altamente organizado, coerente e sistemático (Mannheim, 1986, p. 107).

Podemos considerar, a grosso modo, que o tradicionalismo é uma pulsão, um desejo de volta ao passado, tido como ideal, e que serve como mobilizador para formação de movimentos conservadores. Tal visão de valorização do passado leva à aceitação exclusiva de situações concretas, ou seja, o exercício de projeção de ações sociais que busquem alteração no futuro, como projeto, são descartadas. Suas ações são orientadas sempre num sentido de:

[...] reação, quando é forçado a desenvolver um sistema próprio para contrapor ao dos progressistas ou quando a marcha dos acontecimentos o prova de qualquer influência sobre o presente imediato, de tal forma que ele seria obrigado a girar a roda da história para trás a fim de reconquistar a sua influência (Mannheim, 1986, p. 112).

Consideramos também como componente importante para o pensamento conservador, segundo Nisbet (1986), o princípio de *hierarquia* e do *status*, o qual repousa no exercício da autoridade, e tem por base valores que surgem de um passado celebrado como ideal. Tal compreensão parte do entendimento de que a sociedade é constituída por relações de interdependência que repousam em diferenças de poder, sendo variável de acordo com o contexto (econômico, cultural, político, etc.) o que, em síntese, define a transmissão de valores e, conseqüentemente, gera estabilidade. Tal diferença de status provém, via de regra, do passado.



A autoridade é legítima quando ela provém dos costumes e das tradições de um povo, quando é formada por inúmeros elos numa corrente que começa com a família, prossegue através da comunidade e da classe e culmina na sociedade mais ampla (Nisbet, 1986, p. 71).

Este entendimento sobre a distinção entre esquerda e direita está presente também em Norberto Bobbio (2011). Para este autor, a direita tem como valores principais a busca de *distinção*, ou melhor, compreendem-na como algo dado e desejável, o que se expressam em máximas como a exaltação do *mérito* e da *posição social* (Bobbio, 2011, p. 24). Em síntese, para a direita a desigualdade é imanente a uma pretensa *natureza humana*.

No Brasil, tal compreensão foi propagada pelo pensamento social que atribui, a partir da metade do século XX, a uma falha de adoção de valores meritocráticos, em que o *patrimonialismo* (Holanda, 2004) contamina as relações públicas, impedindo que a livre iniciativa consiga desempenhar seu papel civilizatório. Com base nesta visão liberal-conservadora, surge a oposição binária público-privado como categoria holística e autoevidente para compreender a realidade social brasileira, onde, por um lado, o público é confundido como inerentemente corrupto e incompetente, e, por outro, o privado como a esfera da racionalidade e das virtudes do mercado, sufocadas por aquele (Souza, 2015). Tal interpretação passa a ser adotada de modo geral, seja pela academia quanto pelos meios de comunicação, e passa a ser parte do vocabulário do senso comum (Souza, 2017).

Soma-se a esta interpretação a composição da estrutura de classes no país, constituída por um estrato que Jessé Souza (2016) caracteriza como *ralé*¹⁴, que tem como principais características a baixíssima remuneração e exclusão da formação educacional continuada (elemento fundamental para o acesso a atividades mais bem remuneradas), levando à execução das atividades laborais informais, servis e sem direitos trabalhistas.

Este estrato constitui a maioria da população brasileira. Compõem ainda a divisão de classes brasileiras para o autor a *elite dos proprietários*, a *classe média e suas frações* e a *classe trabalhadora semiquificada* (Souza, 2017, p. 107). Tal caracterização sobre a composição de classes no país é própria das dinâmicas de produção que se estabelecem localmente e que traz consigo, ou ainda, se sustentam em uma série de arranjos que tem por base a distinção em torno da posse de capitais culturais, econômicos, sociais, entre outros (Bourdieu, 2011). São, no entanto, relações que se



constituem na sociedade como um todo, sendo preciso, além da descrição de distinções entre estratos, a compreensão da lógica do modelo societal para defini-la:

Há autores que o utilizam de maneira mais restrita, para designar estratos sociais que se caracterizam pela existência de uma comunidade de interesses, mais ou menos percebidos socialmente, e quase sempre associados a relações de dominação, de poder político e de superposição (também baseadas em diferenças de prestígio social e de estilo de vida). Por fim, existem autores que o aplicam com um máximo de especificidade histórica para designar o arranjo societário inerente ao sistema de produção capitalista. Neste sentido, a classe social só aparece onde o capitalismo avançou suficientemente para associar, estrutural e dinamicamente, o modo de produção capitalista ao mercado como agência de classificação social e à ordem legal que ambos requerem, fundada na universalização da propriedade privada, na racionalização [formal] do direito e na formação de um Estado nacional formalmente representativo (Fernandes, 1977, p.173).

Compreendidas as relações entre classes sociais na dinâmica capitalista local, é fundamental explicitar suas mudanças, mesmo que conjunturais, como uma das possíveis razões para o desenvolvimento do pensamento conservador. Assim, nesta composição, que constitui-se num formato piramidal ao longo do século XX e início do XXI, passa conjuntamente, no ciclo dos governos petistas, a ter sua base reduzida, diminuindo o número de pessoas em situação de miséria, seja pelo aquecimento do mercado de trabalho ou por políticas de transferência de renda e que tem grande impacto no estrato de excluídos, seja pelo aumento de renda quanto pelo acesso à educação. Ainda, parte significativa da *classe trabalhadora semiqualficada* tem também melhorias de seu padrão de vida.

Mesmo sendo insuficiente para compreender as dinâmicas de mobilidade de classe social, o entendimento acerca dos rendimentos expressa na divisão entre segmentos A, B, C, D e E, auxilia na percepção das mudanças da composição dos estratos. Como nota Marilena Chauí (2016, p. 15-16):

Por esse critério, chegou-se à conclusão de que, entre 2003 a 2011, as classes D e E diminuíram consideravelmente, passando de 96,2 milhões de pessoas para 63,5 milhões. No topo da pirâmide, houve crescimento da classe A e B, que passaram de 13,3 milhões de pessoas para 22,5 milhões. Mas a expansão verdadeiramente espetacular ocorreu na classe C, que passou de 65,8 milhões de pessoas para 105,4 milhões.¹⁵

Tais mudanças, que Singer (2012) define como reformismo fraco ou *economia política do lulismo*, num sentido social liberal, caracteriza-se pela manutenção das relações



socioeconômicas estruturais do capitalismo, incidindo via Estado em políticas redistributivas conjunturais, e no caso brasileiro, tem a maior parte de seus recursos, via impostos, dos estratos médios da população sem taxar fortunas, por exemplo.

Por meio de pauta que, de um lado, manteve linhas de conduta do receituário neoliberal e, de outro, tomou decisões no sentido contrário, isto é, próprias da plataforma progressista, forjou-se a combinação sui generis de mudança e ordem que provocou o deslocamento eleitoral do subproletariado (singer, 2012, pos. 2897 [ebook]).

Mesmo considerando estes limites, o período do governo petista resultou em alterações conjunturais significativas via Estado por redistribuição de renda e, conseqüentemente, melhoria da capacidade de consumo, o que gerou, como sustenta Marilena Chauí, da adoção de valores ideológicos da classe média, via de regra individualista, que sustenta sua posição de distinção com base justamente em sua capacidade de consumo, compreensão dividida por Reich (2001), que entende que é próprio da classe média uma visão conservadora, a qual se exacerba em momentos de crise econômica.

Para a autora, há duas variações ideológicas principais, uma sendo a “teologia da prosperidade”, advinda do neopentecostalismo, via de regra tradicionalista, e também da “ideologia do empreendedorismo”, de recorte neoliberal que tende a direcionar suas críticas à “intervenção do Estado” de interferir negativamente na liberdade individual”(Chauí, 2016, p. 20). Ambas visões, mesmo considerando diferenças dos grupos de referência, são parte da mesma *intenção básica*, que parte de relações imediatas e de uma valorização ao passado.

Ambas as formas podem apresentar-se em grupos distintos, mas podem também, em determinadas conjuntura, unir-se. Por exemplo, o Movimento Brasil Livre (MBL)¹⁶ que inicialmente propagava de forma enfática um discurso “liberal”, contrário ao Estado e a favor do empreendedorismo, passa a defender, a partir de 2017, mais fortemente bandeiras conservadoras, como foi o caso da perseguição à exposição *Queermuseu*¹⁷, no *Santander Cultural* de Porto Alegre/RS. Este caso revelou, em nosso entendimento, uma estratégia tanto de buscar apoio de grupos conservadores quanto de demonização da esquerda. Da mesma forma, o deputado federal Jair Bolsonaro, notoriamente reconhecido pela defesa de propostas conservadoras, passa a propagandear que é um “liberal” na economia, como estratégia eleitoral em sua candidatura à presidência. Assim, há uma síntese das bandeiras liberais e conservadoras, tendo como principal bandeira a demonização da esquerda de modo geral.



Apple (2002, p. 56), ao analisar a aliança conservadora que vem direcionando as políticas educacionais no mundo, afirma que

seria algo simplista interpretar que aquilo que se está a passar no sistema educativo traduz apenas o esforço feito pelas elites economicamente dominantes para imporem as suas crenças e os seus desejos na educação. Muito destes ataques representam tentativas de reintegração da educação na agenda económica. No entanto, estes ataques não se resumem apenas a isto nem tão pouco se cingem ao aspecto económico. Conflitos culturais e polémicas acerca da raça e do género coincidem com as alianças de classe e com o poder de classe.

É importante ressaltar, como bem aponta André Kaysel (2015), que a união entre liberalismo econômico e conservadorismo não são uma novidade no Brasil, constituindo acordos conjunturais para o ataque a forças progressistas desde o período do Império, da Primeira República e nos blocos políticos que atacaram Getúlio Vargas e João Goulart.

Assim, o que percebemos no que diz respeito às características do pensamento conservador, é a existência de um ataque, via institucional, às vitórias conjunturais conquistadas no ciclo petista, no que diz respeito à distribuição de renda, direitos trabalhistas e direitos humanos. Como observa Boito Jr. (2016 p. 27), mesmo com seus limites, os governos de Lula e Dilma “[...] implementaram ainda uma política cultural mais favorável aos movimentos feminista, negro e LGBT”, o que representou, para os grupos conservadores no Brasil, um afronte à sua visão de mundo baseada no *status quo*.

Após o golpe civil-empresarial-midiático-parlamentar de 2016, a bancada evangélica, representante mais expressiva do pensamento conservador, passa a atacar mais fortemente as pautas levantadas por estes movimentos e passam a ter significativa influência no governo Temer, em troca de apoio nas votações que dizem respeito às alterações na legislação trabalhista com recorte neoliberal. É este grupo que populariza o termo “ideologia de gênero” e tem como um dos focos principais de atuação a criação de projetos de lei contrários à diversidade e direitos LGBT, além de serem os principais responsáveis pela retirada do termo “gênero”, “educação sexual” e “orientação sexual” do Plano Nacional de Educação (PNE), discutido em 2014 (DIP, 2018). Este é o cenário atual de avanço do pensamento conservador, no qual o projeto Escola Sem Partido ganha visibilidade e emerge como uma proposta educacional nas diferentes esferas do legislativo brasileiro.



O Movimento Escola Sem Partido

O Escola Sem Partido surge enquanto movimento em 2004, liderado por Miguel Narciso Urbano Nagib, procurador do estado de São Paulo. Os defensores do ESP afirmam que o projeto surge da necessidade de defender os estudantes na escola, pois a grande maioria dos professores pregariam uma ideologia considerada danosa dentro de sala de aula. No site do movimento¹⁸, declara-se que atualmente no Brasil há, de modo generalizado, a prática de “assédio de grupos e correntes políticas e ideológicas com pretensões claramente hegemônicas” que agem de forma a doutrinar os estudantes, o que seria, conforme os autores do ESP, apoiado pelas escolas e autoridades. Aqueles que levam adiante tal projeto de “engenharia social” estariam agindo de forma paralela a sequestradores, ao causarem “síndrome de estocolmo” nos estudantes. Ou seja, aqueles (as) estudantes que não partilham dos valores do ESP, em especial os que venham a participar do movimento estudantil (tendo como alvo preferencial diretórios acadêmicos, DCEs, UNE e, especialmente, integrantes do PCdoB), sofrem de um “problema psicológico”.

É importante considerar que o ESP foi inspirado em um movimento que surgiu nos Estados Unidos, denominado *No Indoctrination*, fundado por Luann Wright, “ao perceber um viés crítico nos textos de um certo professor de literatura de seu filho, que orientava a leitura de artigos qualificados por ela como ‘tendenciosos’ sobre o racismo dos brancos contra os negros” (Espinoza, Queiroz, p. 50, 2017). Da mesma forma como o *No Indoctrination*, o Escola sem Partido utiliza-se de uma falsa neutralidade e apartidarismo para questionar as escolas e seus professores e difundir concepções conservadoras. Cabe salientar que o coordenador do movimento, Miguel Nagib teve, vínculos como articulador do Instituto *Millenium*, organização de caráter conservador, formada por empresários, jornalistas e profissionais liberais. Nagib foi autor de artigos e doador de tal Instituto.

Nagib também declara admiração pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e por Jair Bolsonaro, além de ser participante frequente de grupos e debates que autodeclaram-se como conservadores ou de direita, como notam Espinoza e Queiroz (2017 p. 55):

Alguns dos eventos que contaram com a participação de Nagib: palestrante do I Congresso de Fundação do Partido Conservador, em Curitiba, junho de 2015; palestrante do I Congresso de Agentes Políticos Evangélicos do Brasil (Capeb), evento organizado pela Frente Parlamentar Evangélica (FPE), que iria se realizar em outubro de 2015, mas que foi cancelado (entre os palestrantes, estavam o Deputado Federal



Eduardo Cunha pelo PMDB/RJ e o Pastor Silas Malafaia); entrevistado no programa “Conexão Conservadora”, podcast sem periodicidade que divulga entrevistas e séries de programas sobre conservadorismo e apresentado por Alex Brum Machado; entrevistado no programa virtual “Papo que Bate”, comandado por Bia Kicis; entrevistado no programa “Terça Livre”, conduzido por Allan dos Santos, que faz parte de um projeto que surgiu em 2014 como reação ao que chama de “fraude” das eleições. Os fundadores declaram-se seguidores de Olavo de Carvalho.

Há, portanto, na interpretação de Nagib, “doutrinação” quando não são propagados os valores dos grupos dos quais participa.

A construção da narrativa do ESP é aquela observada por Mannheim (1952) de desconstruir a participação do antagonista apresentando-a como ideologia, conforme compreendida no senso comum, num sentido de distorção da realidade e, conseqüentemente, apresentar a sua visão de mundo como *a realidade*. Isso ocorre especialmente a partir do avanço de expressões conservadoras no cotidiano e que passam a tratar esta visão como *normalidade*:

O Escola sem Partido utiliza-se de uma ‘linguagem próxima do senso comum, recorrendo a dicotomias simplistas que reduzem questões complexas a falsas alternativas’, e expande-se por meio de memes, ‘imagens acompanhadas de breves dizeres’, por ‘quatro elementos principais: primeiro, uma concepção de escolarização; segundo, uma desqualificação do professor; terceiro, estratégias discursivas fascistas; e, por último, a defesa do poder total dos pais sobre os seus filhos’. Contém estratégias discursivas fascistas através de ‘analogias voltadas à docência, que desumanizam o professor’, tratando-o como ‘um monstro, um parasita, um vampiro’ na forma de memes ofensivos, incluindo Gramsci e Paulo Freire. Instalam um ‘clima de denunciamento’ e ‘um discurso de ódio’ (Ciavatta, 2017, p. 9).

A partir de tal agenda, articulam-se organizações políticas de cunho reacionário que utilizam a proposta do ESP como plataforma eleitoral e promovendo-se utilizando de construções distorcidas sobre os debates que são feitos nas escolas, além de, via de regra, apresentarem-se como defensores de valores da sociedade brasileira e agirem de forma violenta e difamatória (Ciavatta, 2017, p. 11-12).

Ainda que o movimento tenha surgido em 2004, foi em 2014, a partir de uma solicitação do Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, que Nagib elaborou uma proposta de projeto de lei que viabilizasse os pressupostos do Movimento Escola sem Partido. O projeto de Lei n. 2974/2014, que propõe a criação do Programa Escola Sem Partido, foi então apresentado, em maio de 2014, na Assembléia Legislativa do Estado



do Rio de Janeiro. No mesmo ano, o irmão do deputado, o Vereador Carlos Bolsonaro, apresentou na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro um projeto com o mesmo teor. A partir dessas duas iniciativas, Nagib disponibilizou no site do ESP os modelos dos anteprojetos de lei, para serem consultados e copiados pelos legisladores que quisessem apresentá-los em suas câmaras.

A partir dos anos de 2014 e 2015, o ESP ganhou uma grande visibilidade. Em 2015, foi apresentado o Projeto de Lei n. 867/2015 à Câmara dos Deputados Federal pelo deputado Izalci Lucas Ferreira, do PSDB-DF, o qual também defendia as proposições do Escola sem Partido. Este projeto traz entre suas propostas o fim do sistema de cotas para o ingresso no ensino superior e redução da duração do ensino fundamental de 9 para 6 anos. Também, é comum referirem-se às disciplinas de História, Sociologia e Filosofia como responsáveis principais pela “doutrinação”, sugerindo que sejam substituídas pelo ensino religioso e pelo retorno da disciplina de Educação Moral e Cívica (Neto e Santos, 2017, p. 169). O deputado Izalci, assim como a maioria absoluta de parlamentares que defendem o ESP (incluindo a família Bolsonaro), mantém relações diretas com organizações neopentecostais (Espinoza e Queiroz, 2017, p. 60), sendo a base de apoio do projeto tanto na câmara federal quanto nos estados. O ESP chega no Senado Federal em 2016, a partir do PL 193/2016 do senador Magno Malta (PR-ES).

Seus defensores, conforme observa Penna (2017), partem de uma visão de que a escolarização é sinônimo de treinamento/instrução, cabendo a educação propriamente dita à família e à igreja. Com isso, defendem estratégias de desmoralização dos profissionais da educação, balizadas com discursos fascistas (visível no discurso apartidário, mas com relações pragmáticas, sem exceção, com partidos de direita e organizações neopentecostais, além do tom agressivo e difamatório dos oponentes, sempre ligados a propostas progressistas), e, por fim, postulam uma visão sobre família baseada na posse ou poder absoluto sobre os filhos. Tal discurso tem tido aceitação inclusive entre professores(as), onde a noção de neutralidade e dissociação da educação são vistas unicamente como instrução da política. No entanto, como bem nota Saviani (2017, p. 231):

Ao proclamar a neutralidade da educação em relação à política, o objetivo a atingir é o de estimular o idealismo dos professores fazendo-os acreditar na autonomia da educação em relação à política, o que os fará atingir o resultado inverso ao que estão buscando: em lugar de, como acreditam, estar preparando seus alunos para atuar de



forma autônoma e crítica na sociedade, estarão formando para ajustá-los melhor à ordem existente e aceitar as condições de dominação às quais estão submetidos. Eis por que a proposta da escola sem partido se origina de partidos situados à direita do espectro político com destaque para o PSC (Partido Social Cristão) e PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) secundados pelo DEM (Democratas), PP (Partido Popular), PR (Partido da República), PRB (Partido Republicano Brasileiro) e os setores mais conservadores do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) (SAVIANI, 2017, p. 231).

Na esteira desse pensamento que reduz o sentido social da educação e do papel docente, sob a ideologia da neutralidade do conhecimento, esconde-se, segundo Frigotto (2017), a privatização do pensamento. Para o ESP, além do ato de Educar estar dissociado do ato de ensinar, a educação escolar assume o papel de mercadoria, na qual o professor presta um serviço e o aluno é o consumidor. Nagib (2013) já afirmou, inclusive, ter pensado o projeto da Escola sem Partido a partir do código de defesa do consumidor.

O Movimento Escola sem Partido, em uma jogada de palavras, tenta mascarar seu sentido ideológico e político e de uma forma inclusive autoritária, busca criminalizar professores, ameaçando o papel da escola pública na formação humana pautada em valores de liberdade, direito e respeito a diversidade.

Páginas de Apoio ao ESP no Facebook

A rede apresentada a seguir traz a modularidade e grau de entrada das páginas da rede de apoio ao ESP no *facebook*, assim como sua relação de acordo com as curtidas realizadas para outras páginas, montando a rede:



Imagem 1. Post da página Escola sem Partido no Facebook
 Fonte: página do facebook Escola Sem Partido (2018)

A página menciona outras páginas relacionadas, que representam os núcleos regionais do movimento, também fazendo menção ao vereador Fernando Holiday, da cidade de São Paulo, eleito pelo partido Democratas e militante do Movimento Brasil Livre. Este vereador é conhecido por fazer vídeos de “fiscalização nas escolas” e em apoio ao ESP. Também pode-se perceber a existência de outra rede criada por grupos evangélicos em apoio ao projeto e que construiu uma rede com as páginas de apoio ao político Jair Bolsonaro e ao Movimento Brasil Livre. Consta ainda a presença de outras personalidades, como Beatriz Kicis¹⁹, procuradora no Distrito Federal, integrante do Foro de Brasília²⁰ e apoiadora do ESP e com posições abertamente conservadoras. A segunda página de apoio ao projeto em número de curtidas é a *Mães pelo Escola sem partido*, contando em dezembro de 2017 com 21.142 curtidas. Esta reproduz publicações da página de Miguel Nagib, comentando em especial sobre a doutrinação de gênero. Uma das “denúncias” é sobre a campanha contra a violência às mulheres, que utiliza crianças em um vídeo para tratar do tema:



Mães pelo Escola sem Partido compartilhou uma publicação. ...

23 de maio às 07:00 · 🌐

CÓPIA GROSSEIRA DE UMA CAMPANHA FRANCESA.

Vemos aqui uma pauta feminista, que usa crianças como meio de alcançar um objetivo!!!

**NO MUNDO DAS CRIANÇAS
NÃO SE BATE EM MULHER**

*Imagem 2. Post da página Mães pelo Escola sem Partido no Facebook
fonte: Página do facebook Mães pelo Escola sem Partido (2018)*

A rede, que se constitui em torno do Escola sem Partido, traz um discurso conservador, apresentando a pauta de valores tradicionais que se expressa através da delimitação de um antagonista, como, por exemplo, o debate sobre gênero, o que é ressignificado de forma a distorcer o objetivo da proposta do debate. Enquanto o debate busca, entre outras questões, promover a aceitação da diversidade de forma a evitar a violência, ou ainda promover a educação sexual, os proponentes do ESP propagam que se pretende negar a biologia, convencer as crianças de que não existe orientação sexual (o que colocam como “opção sexual”) e que a educação sexual serviria de incentivo ao sexo. Ao fazerem isso, também incitam a perseguição²¹ a educadores que tratam de temas considerados “doutrinação”, e promovendo obras que abordam o papel dos professores como instrutores e não como educadores²². Nesta produção discursiva não se apresentam, diretamente, como conservadores, mas utilizam as pautas (religião cristã como regra, família idealizada, valores “tradicionais” e, via de regra, a demonstração da legitimidade do uso dos símbolos nacionais relacionados a estes valores) como instrumento de constituição de uma “normalidade” daquilo que é correto e desejado ao comportamento nacional, em especial no que diz respeito aos costumes e enfocando as crianças e jovens, figuras tidas como vítimas de uma pretensa “doutrinação”, sempre relacionada a bandeiras progressistas (direitos humanos, gênero, diversidade religiosa, marxismo, educação sexual).



Rede de Apoiadores do ESP no *Instagram*

Após a verificação quantitativa das páginas e de suas relações no *facebook*, partimos para o estudo de outras mídias sociais, em especial, o *Instagram*.

Em análise temporal do surgimento da *hashtag* *#escolasempartido* no *Instagram*, realizada a partir de março de 2017, percebe-se que o termo passa a ser empregado amplamente por uma rede que o traz junto a uma série de outros termos como marcadores ideológicos, não se resumindo à pauta da defesa do projeto ESP, mas em torno de valores que são apresentados pelos próprios autores como característicos da direita.

Entre março e abril há somente uma publicação sobre o escola sem partido, realizado por um professor que traz uma imagem criticando a “doutrinação” na universidade, além de outras *hashtags* que já vinculam outras pautas: *#universidadelivre*, *#faculdadesempartido*, *#escolasempartido*, *#bolsonaro2018*, *#pensamentolivre*. No período de abril a setembro não há registros.

A análise da rede de apoio ao ESP foi feita no período de 1º de abril de 2017 a 31 de janeiro de 2018. A *hashtag* passa a ser amplamente utilizada a partir de 12 de outubro de 2017 e é iniciada por uma usuária favorável ao projeto (perfil A) que compartilha uma imagem do perfil da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tinha objetivo de conscientização sobre diferenças e a ressignifica, tornando a imagem “exemplo” de “ideologia de gênero”, sendo a primeira publicação a seguinte:



Imagem 3. Post do perfil A no Instagram
 fonte: Instagram (2017). Republicado pelo perfil A

Este foi o compartilhamento da imagem realizado pelo Perfil A que passa a distribuir a imagem com a rede de apoio ao ESP. É possível observar na listagem de hashtags os marcadores de identificação do grupo, tais como: #direita #conservadores #reaças #opressores #nacionalistas #patriotas, #foraideologiadegênero, #meusfilhosminhasregras, #escolasempartido, #escolalivre, #marxismocultural, #pai, #mãe, #filhos, #filhas, #menino, #menina, #paidemenina, #maedemenino, #oração, #painosso, #civismo.

A rede que menciona o #escolasempartido no período conta com 3.260 nós e 4.759 arestas e apresenta a configuração conforme o gráfico 2, considerando a análise de modularidade e grau de entrada dos nós. Desta forma, os nós mais visíveis são os que recebem maior número de menções e curtidas, tornando-se centrais na rede de apoio ao ESP, partindo da análise da hashtag #escolasempartido, conforme grafo²³ a seguir:

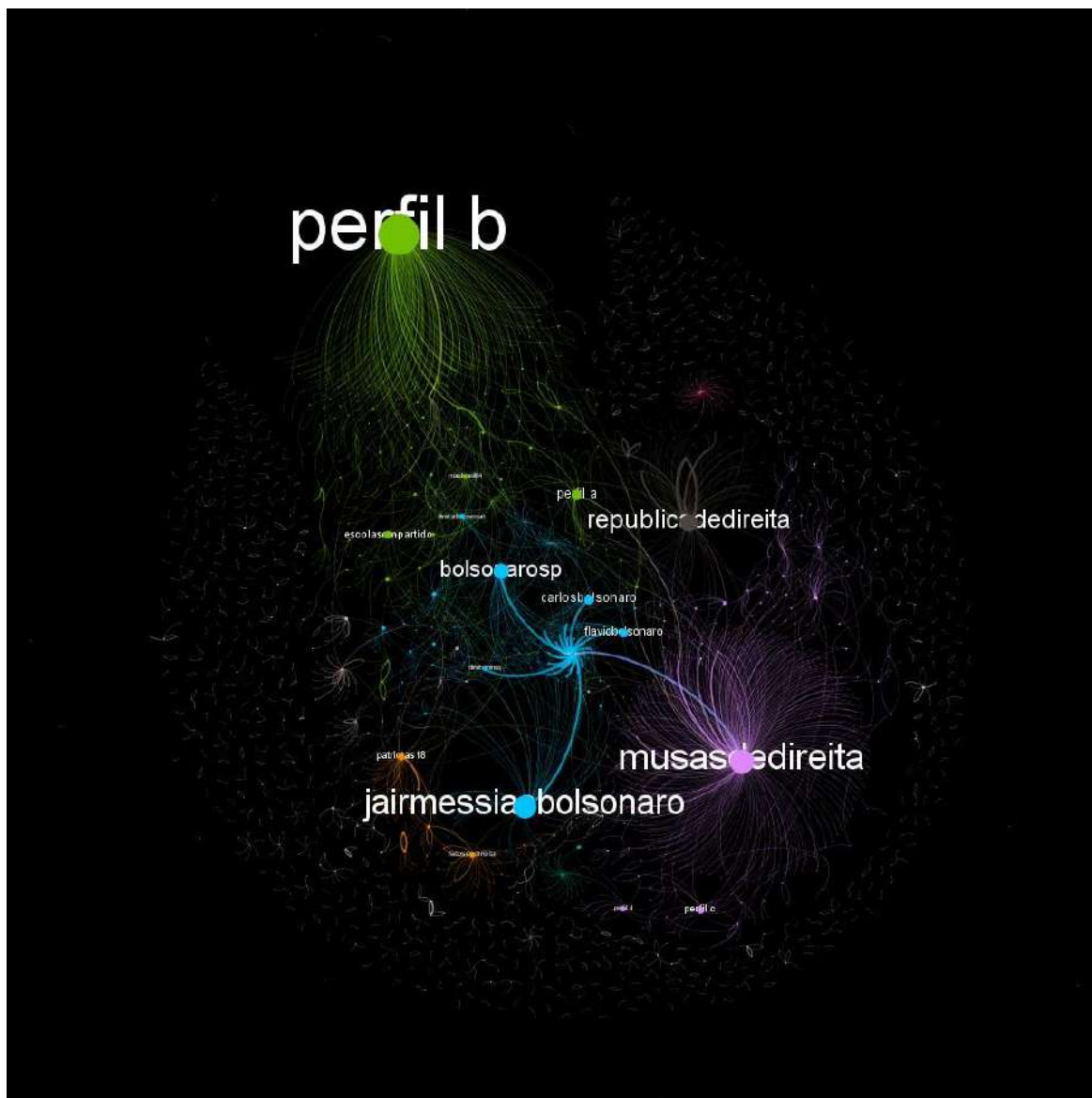


Gráfico 2. Rede de apoio ao ESP no Instagram

Fonte: elaboração própria com base na ferramenta gephi.

Considerando o período de análise e como já mencionado, conforme o grau de entrada, os dez perfis mais relevantes na rede de apoio ao ESP no *Instagram* são os seguintes:

Usuário	publicações ²⁴	seguidores	auto descrição do perfil
perfil B	2.731	3.179	Declara-se como conservador, patriota, cristão, a favor do desarmamento e apoiador de Bolsonaro ²⁵
musasdedireita	761	18.300	"Ninguém é obrigado a apoiar Bolsonaro, porém saiba respeitar a página para evitar processos!"
jairmessiasbolsonaro	1252	1 milhão de seguidores	"Capitão Paraquedista do Exército Brasileiro, deputado federal eleito pelo RJ."
republicadedireita	531	8.563	"Membro dos @AdmsDeDireita CD #BOLSONAROPRESIDENTE"
bolsonarosp	4.220	488 mil	"Eduardo Bolsonaro Policial Federal, advogado (Direito UFRJ), filho de Jair Bolsonaro. Dep Fed por SP (82.224 votos). Twitter: BolsonaroSP"



			#eduardobolsonaro
perfil A	13.391	7.536	Sem descrição ²⁶
carlosbolsonaro	1.244	177 mil	“Filho do Deputado Federal @jairmessiasbolsonaro, Vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro p/ o quinto mandato (106.657votos)”
flaviobolsonaro	1.566	223 mil	“Flávio Bolsonaro #Bolsonaro #Bolsonaro2018 Patriota, conservador, advogado, empresário e reacionário, reajo a tudo que não presta.”
escolasempartido	6	1.621	Sem descrição
patriotas18	515	5.090	“Patriota, Armamentista, Anti Drogas, A Favor da Vida, ADM's de Direita com Bolsonaro”

Tabela 1. Perfis de apoio ao ESP no Instagram

Ao verificar o grau de entrada, os usuários mais relevantes na rede são o perfil B (com publicações contra a esquerda e em apoio a Bolsonaro), musasdedireita (com publicações de mulheres vestindo camiseta com a foto de Bolsonaro), jairmessiasbolsonaro, republicadedireita, bolsonarosp e perfil A (usuária que iniciou a difundir o hashtag com objetivo central sobre o tema, em especial contra a “ideologia de gênero”). Alguns perfis tornaram-se referência, em especial os da família Bolsonaro, não por tratar em especial do tema do ESP, mas porque o *hashtag* #escolasempartido, como dito antes, passou a constar na marcação de publicações que promovem a candidatura de Jair Bolsonaro, e este, por sua vez, é mencionado em qualquer publicação que tenha cunho conservador. É relevante também a participação da família Bolsonaro na defesa do projeto e que passa a fazer parte de sua plataforma política, e, conseqüentemente, dá visibilidade junto aos seus eleitores, como evidencia a imagem a seguir:



Imagem 3. Cartaz de divulgação para audiência pública
 fonte: página no Facebook do ESP, publicado em 22 de maio de 2017.

Resulta que a presença do termo escola sem partido na rede é apenas um dos marcadores ideológicos para identificação da rede e que dá relevância a quem representa valores conservadores de um modo geral. No exemplo abaixo, uma constante quando trata especificamente de publicação no *Instagram* sobre o ESP que são, via de regra, contrários à discussão de gênero:



Imagem 5. Post do Perfil B no Instagram
 Fonte: página do Perfil B no Instagram, publicado em 12 de outubro de 2017.



O perfil A trata mais em suas publicações diretamente do ESP, considerando também a rejeição ao tema gênero e enfatizando que à escola cabe o papel de instrução, delimitando o tema por conteúdos e inferindo a existência da doutrinação. É central a compreensão de que os valores, ou ainda, a educação é um assunto estritamente familiar:

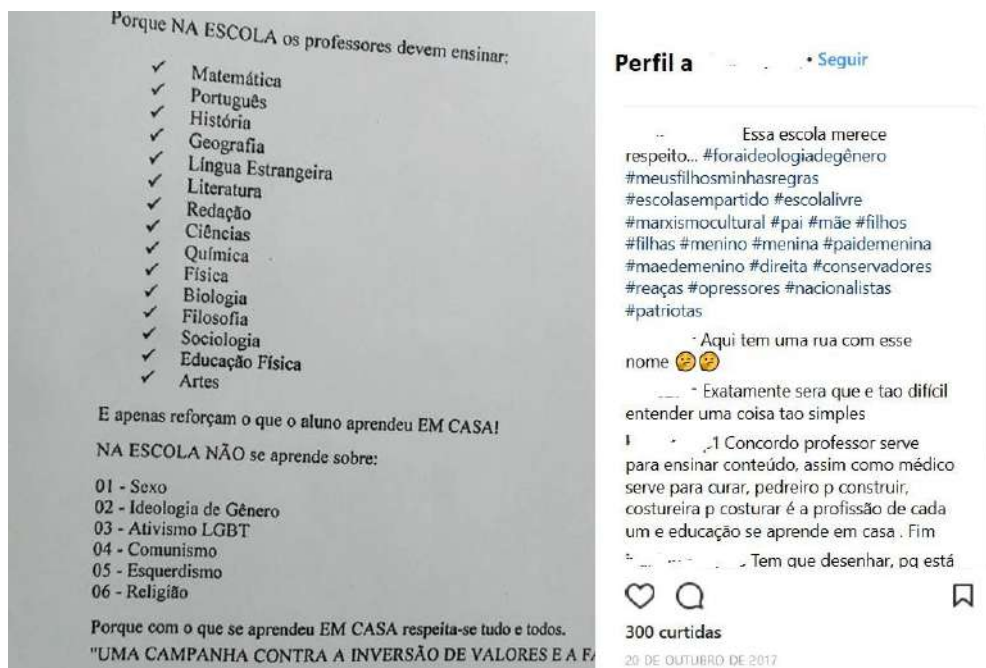


Imagem 6. Post do perfil a no Instagram
 fonte: página do Perfil a no Instagram, publicado em 20 de outubro de 2017.

Nesta seção, procuramos evidenciar o modo como o discurso conservador vai sendo difundido na mídia social do *Instagram* atrelado ao movimento Escola sem Partido e que há algumas figuras públicas com agendas políticas tipicamente conservadoras, como a família Bolsonaro.

Considerações Finais

A revisão de materiais produzidos sobre os proponentes do ESP e a análise do perfil dos seus proponentes, assim como suas redes sociais de sustentação permitiu, identificar tanto suas pautas quanto sua rede de apoio, em especial contra quem se dirigem. É certo afirmar que este grupo é composto por indivíduos com crenças conservadoras, com base cristã (em especial neopentecostal, mas não somente), e com vínculos diretos com parlamentares de partidos de direita, compondo o ESP somente uma das pautas de uma agenda que busca se estabelecer enquanto projeto de poder institucional, sendo referência o candidato Jair Messias Bolsonaro.



Discursivamente, buscam desqualificar seus opositores através da estratégia de desqualificação das pautas, tratadas ora como doutrinação (caso do ESP), ora como “projeto de destruição da família” (caso dos temas sobre gênero, relacionados ao tema anterior), tratando-os como inimigos das famílias e do país, liderados pela “esquerda”, que é tratada, não raramente, como “terrorista”, por exemplo. Ao tornar pautas progressistas relacionáveis a determinados grupos (marxistas, gays, feministas, professores(as) e etc.), consolidam seu discurso e tornam aceitável ao senso comum sua narrativa, mesmo que não seja factível, pois consolidam suas pautas via mídias sociais que, via de regra, não estão abertas ao diálogo.

Assim, ao verificarmos quem são os proponentes do ESP, compreendemos ser fundamental explicitar que esta proposta apresenta-se de forma enganosa como não partidária, surgindo de grupos reacionários, com partidos políticos de direita e organizações reacionárias e com um projeto de poder. Fazem parte destes grupos as organizações neopentecostais e parte da igreja católica, partidos conservadores e organizações não governamentais como o MBL, Revoltados Online, entre outros. Têm como expoente atual o deputado federal Jair Messias Bolsonaro, integrante da bancada evangélica e apologista da ditadura militar, que atua em conjunto com seus filhos parlamentares.

Após analisarmos a rede de apoio do movimento escola sem partido, percebemos que seus defensores agem de forma militante nas mídias sociais de forma a propagar - sem que seja necessário desvelar este aspecto, pois o colocam abertamente - valores conservadores, em especial a bandeira neopentecostal, contra o debate de gênero, assim como outras pautas que são tratadas como componentes destes valores, tendo como objetivo momentaneamente a propulsão da candidatura à presidência de Jair Bolsonaro. Percebemos, desta forma, que o nome do projeto é uma falácia, pois parte de grupos articulados de antemão com um projeto reacionário de poder e buscando invisibilizar quaisquer pautas que tratem da diversidade, inclusive no ambiente escolar, assim como na consideração deste ambiente como espaço de experiência política não pautada por valores que são defendidos por

estes grupos. A partir de um discurso pautado no senso-comum e de fácil adesão, percebe-se no Movimento Escola sem Partido uma perspectiva fortemente conservadora articulada e difundida por meio das redes sociais digitais, que chega na sociedade civil, em entidades religiosas e em partidos políticos de direita.



Notas

¹ Artigo originalmente publicado com título *A Rede de Difusão do Movimento Escola Sem Partido no Facebook e Instagram: conservadorismo e reacionarismo na conjuntura brasileira* na Revista Educação & Realidade (Link: <https://bit.ly/2L5q7qT>).

² Doutor em Ciências Sociais (PUCRS). Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

³ Doutora em Educação Ambiental (FURG). Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

⁴ Doutorando em Política (Universidade de York).

⁵ Recomendamos o artigo de Romancini (2018) sobre a cobertura noticiosa sobre o ESP e o uso do *hashtag* #escolasempartido na mídia social *Twitter*. Nos meios de comunicação, percebe-se que o tema é tratado de forma neutra ou desfavorável ao ESP, enquanto no *twitter* há um engajamento favorável, constituindo o perfil de seus apoiadores, na maioria, de conservadores, indo ao encontro de nossos resultados.

⁶ Fonte: *Eleitor de Bolsonaro é o mais ativo nas redes, diz Datafolha* em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1947267-eleitor-de-bolsonaro-e-o-mais-ativo-nas-redes-diz-datafolha.shtml>

⁷ Tabela com o total de páginas, considerando curtidas e comentários à época disponível no link: (suprimido para não identificar autoria)

⁸ Application Programming Interface (interface de programação de aplicativos) são os padrões de programação de um aplicativo determinado.

⁹ <https://apps.facebook.com/netvizz/>. Este aplicativo possibilita analisar, entre outras informações, as páginas ou grupos (abertos) sobre os assunto selecionado

¹⁰ Disponível em: <https://netlytic.org/>. O site permite acessar as redes em diversas mídias sociais (twitter, facebook, instagram, youtube, etc.), observando as restrições dos APIs de cada uma destas mídias.

¹¹ Registros por mês: Outubro/2017 foram 3.385 registros (333 posts com laços, 868 laços e 2.215 perfis mencionados). Novembro foram 4.908 registros (376 posts com laços, 1.206 laços e 2.812 perfis mencionados). Dezembro foram 3.178 registros (354 posts com laços, 1.155 laços e 2.088 perfis mencionados). Janeiro foram 6.861 registros (525 posts com laços, 1.525 laços e 2.744 perfis mencionados). No total foram 18.322 registros.

¹² Disponível em: <http://gephi.com/>. O programa permite montar gráficos das redes extraídas de diversas fontes. No caso desta pesquisa, extraídas do netvizz (para o facebook) e do netlytic (para o Instagram).



¹³ Um mesmo estilo de pensamento pode ser encontrado em uma série de grupos distintos, os quais sustentam valores comuns mas que não constituem necessariamente uma unidade organizativa. Por exemplo, são conservadores o grupo revoltados online, propagador de pautas reacionárias em mídia social, assim como o Partido Social Cristão (PSC), que aglutina uma série de parlamentares que levam adiante pautas que se contrapõem aos Direitos Humanos na Câmara de Deputados.

¹⁴ Conforme nossa interpretação, é possível definir também como *subproletariado*, parte da população da classe trabalhadora super empobrecida (Singer, 2012). Esse estrato, segundo André Singer, é que dará sustentação ao governos petista a partir de 2002.

¹⁵ Dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

¹⁶ Movimento que, após investigação, constatou-se ser financiado por grupos empresariais norte-americanos, em geral de fundações de direita, em especial dos irmãos Koch (Amaral, 2016, p. 50-51).

¹⁷ “Queermuseu — Cartografias da diferença na arte brasileira” é uma exposição brasileira que reúne um conjunto de obras de arte que tratam de expressão e identidade de gênero, diversidade e diferença.

¹⁸ <http://www.escolasempartido.org>

¹⁹ Mantém um canal no Youtube com aproximadamente 36 mil inscritos e produz conteúdos que abordam, via de regra, denúncia contra o “esquerdismo” e a defesa do regime militar. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCeCm6AiQfKamRIBHOGPNVOg>

²⁰ O Foro de Brasília é uma organização apartidária, com lema “força e honra”, tendo como um dos objetivos principais contrapor-se ao Foro de São Paulo. Entre seus projetos, constam o pedido de revogação da Resolução nº 11, de 18 de dezembro de 2014 da Secretaria de Direitos Humanos, que estabelece parâmetros para inclusão dos itens orientação sexual, identidade de gênero e nome social nos boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades policiais. Mais informações no site: www.forobsb.com.

²¹ É prática comum das páginas citadas a divulgação de vídeos de sala de aula com “denúncias de perseguição”, ou ainda, a divulgação de fotos e links dos perfis de quem se opõe ao ESP.

²² Livro “Professor não é educador”, conforme o link disponibilizado na página Mães pelo Escola sem Partido: <https://shoutout.wix.com/so/4MDzZ7gU#/main>. A obra ressalta que o papel dos (as) professores (as) é somente o de instrução de conteúdos.

²³ Link para o arquivo em formato gephi no link: (suprimido para não identificar autoria)

²⁴ Número de publicações e seguidores verificado em abril de 2018.



²⁵ Não apresentamos a auto-descrição dos perfis pessoais mesmo que mantenham publicações públicas, para manter a privacidade destes usuários.

²⁶ As publicações deste perfil são, via de regra, de apoio ao período militar, à candidatura de Jair M. Bolsonaro e contra a esquerda de modo geral, em especial contra o Partido dos Trabalhadores - PT.

Referências

Amaral, Marina. Jabuti não sobe em árvore: como o MBL se tornou líder das manifestações pelo impeachment. IN: Singer, André [et al.]. Por que Gritamos Golpe?: para entender o impeachment e a crise política no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2016.

Apple, Michel W. "Endireitar" A Educação: as escolas e a nova aliança conservadora. IN: Currículo sem Fronteiras, v.2, n.1, pp.55-78, Jan/Jun 2002. Disponível em: <http://www.curriculosemfronteiras.org/vol2iss1articles/apple.pdf> Acesso em 16 de junho de 2018.

Bobbio, Norberto. Direita e Esquerda: razões e significados de uma distinção política. 3ª ed. São Paulo: Editora Unesp, 2011.

Boito Jr., Armando. Os atores e o enredo da crise política. IN: Singer, André [et al.]. Por que Gritamos Golpe?: para entender o impeachment e a crise política no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2016.

Bourdieu, Pierre. O Senso Prático. 2ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.

Carvalho, Fabiana Aparecida de; Polizel, Alexandre Luiz e Maio, Eliane Rose. Uma escola sem partido: discursividade, currículos e movimentos sociais. IN: Semina: Ciências Humanas e Sociais, Londrina, v. 37, n. 2, p. 193-210, jul./dez. 2016

César, Maria Rita de Assis e Duarte, André de Macedo. Governo e pânico moral: corpo, gênero e diversidade sexual em tempos sombrios. IN: Educar em Revista, Curitiba, n. 66, p. 141-155, out./dez. 2017.

Chauí, Marilena. A nova classe trabalhadora brasileira e a ascensão do conservadorismo. IN: Singer, André [et al.]. Por que Gritamos Golpe?: para entender o impeachment e a crise política no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2016.

Ciavatta, Maria. Apresentação: resistindo aos dogmas do autoritarismo. IN: Frigotto, Gaudêncio (org.). Escola "Sem" Partido: Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017.

DIP, Andrea. Em Nome de Quem?: a bancada evangélica e seu projeto de poder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.



Espinoza, Betty R. Solano e Queiroz, Felipe B. Campanuci. Breve análise sobre as redes do escola sem partido. IN: Frigotto, Gaudêncio (org.). Escola “Sem” Partido: Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017.

Fernandes, Florestan. Problemas de conceituação das classes sociais na América Latina. IN: Zenteno, Raúl B. As Classes Sociais na América Latina: problemas de conceituação. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977.

Frigotto, Gaudêncio (org.). Escola “Sem” Partido: Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017.

Holanda, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed. 18ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

Kaysel, André. Regressando ao Regresso elementos para uma genealogia das direitas brasileiras. IN: Cruz, Sebastião Velasco e; Kaysel, André e Codas, Gustavo (org.). *Direita, Volver!: o retorno da direita e o ciclo político brasileiro*.

Lazega, Emmanuel e Higgins, Silvio Salej. Redes Sociais e Estruturas Relacionais. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014.

Lemieux, Vincent e Ouimet, Mathieu. Análise Estrutural das Redes Sociais. Lisboa, Portugal: Instituto Piaget, 2008.

Macedo, Elizabeth. As demandas conservadoras do movimento escola sem partido e a base nacional curricular comum. IN: Educação e Sociedade. Campinas, v. 38, nº 139, p. 507-524, arb.-jun., 2017.

Mannheim, Karl. O Pensamento Conservador. IN: Martins, José de Souza (org.)

Introdução Crítica à Sociologia Rural. São Paulo: Ed. Hucitec, 1986.

Mannheim, Karl. Ideologia e Utopia: introdução à sociologia do conhecimento. Editora Globo, Porto Alegre: 1952.

Mills, C. Wright. Power, Politics & People: the collected essays of C. Wright Mills. New York, Oxford University Press, 1963.

Moura, Fernanda Pereira de e Salles, Diogo da Costa. O Escola Sem Partido e o ódio aos professores que formam crianças (des)viadas. IN: Periódicus. n.9, v.1 maio-out. 2018. p. 136- 160.

Nagib, Miguel. Professor não tem direito de ‘fazer a cabeça’ de aluno. Artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, 03 de outubro de 2013. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2013-out-03/miguel-nagib-professor-nao-direito-cabeca-aluno>> Acesso em: 19/06/2018.



Neto, Luiz Bezerra e Santos, Flávio Reis dos. Agosto de 2016: a verdadeira face do golpe de Estado no Brasil. IN: Lucena, Carlos; Previtali, Fabiane Santana; Lucena, Lurdes. A Crise da Democracia Brasileira. volume I. Uberlândia: Navegando Publicações, 2017.

Nisbet, Robert A. Conservadorismo e Sociologia. IN: Martins, José de Souza (org.) Introdução Crítica à Sociologia Rural. São Paulo: Ed. Hucitec, 1986.

Penna, Fernando Araujo. O Escola sem partido como chave de leitura do fenômeno educacional. IN: Frigotto, Gaudêncio (org.). Escola "Sem" Partido: Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017.

Pilcher, Jane. Mannheim's Sociology of generations: an undervalued legacy. IN: The British Journal of Sociology, vol. 45, nº 3 (set., 1994), p. 481-495.

Recuero, Raquel. Redes Sociais na Internet. 2ª ed. Porto Alegre: Sulina, 2014. Recuero, Raquel; Bastos, Marcos e Zago, Gabriela. Análise de Redes para Mídia Social. Porto Alegre: Sulina, 2015.

Romancini, Richard. "Vamos tirar a educação do vermelho": o Escola Sem Partido nas redes digitais. Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação /E-compós, Brasília, v.21, n.1, jan./abr. 2018.

Saviani, Demerval. A Crise política no Brasil, o golpe e o papel da educação na resistência e na transformação. IN: Lucena, Carlos; Previtali, Fabiane Santana; Lucena, Lurdes. A Crise da Democracia Brasileira. volume I. Uberlândia: Navegando Publicações, 2017.

Silveira, Sergio Amadeu. Direita nas redes sociais online. IN: Cruz, Sebastião Velasco e; Kaysel, André e Codas, Gustavo (org.). *Direita, Volver!: o retorno da direita e o ciclo político brasileiro*.

Singer, André. Os Sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

Souza, Jessé. A Elite do Atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017. _____. A Ralé Brasileira: quem é e como vive. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016.

_____. A Tolice da Inteligência Brasileira: como o país se deixa manipular pela elite. São Paulo: Leya editora, 2015.

Zuin, Vânia Gomes e ZUIN, Antônio Álvaro Soares. A formação no tempo e no espaço na internet das coisas. IN: Educação e Sociedade. Campinas, v. 37, nº 136, p. 757-773.



Otras líneas de ponencias adicionales



Contribuciones para el estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado: Hacia la construcción de una mirada latinoamericana.

Mariana Fry

Resumen

En el contexto latinoamericano actual, signado por el ascenso y declive de gobiernos progresistas, el estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado adquiere centralidad para explicar las dinámicas de movilización social, contención y conflicto. Sin embargo, no se han identificado trabajos que sistematicen los desarrollos teóricos en esta área.

El objetivo de la ponencia es revisar y valorar los instrumentos conceptuales disponibles para analizar las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado. La metodología empleada consiste en una revisión teórica de las teorías sobre movimientos sociales, que abarca desde los abordajes clásicos hasta las contribuciones latinoamericanas recientes.

Como resultado de este recorrido, se elabora una propuesta teórica para el estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado ajustada al contexto latinoamericano, caracterizado por el ascenso de gobiernos que mantienen fuertes vínculos con los movimientos sociales pero que a su vez se encuentran condicionados por el modo específico en que la región se inserta en el mercado mundial. Se busca de este modo complejizar el binomio autonomía-cooptación para entender las formas de movilización desplegadas en nuestro contexto.

Palabras clave

Movimientos sociales; relaciones gobierno Estado.

Introducción

El presente trabajo tiene el objetivo de revisar y valorar los instrumentos conceptuales disponibles para el estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado en el contexto latinoamericano actual.

En las últimas dos décadas asistimos en América Latina al despliegue de un nuevo ciclo de movilizaciones, que puso en cuestión los resultados del proyecto neoliberal implementado en la región. De acuerdo a Svampa (2010), éste comenzó en el año 2000 con la guerra del agua en Bolivia, y tuvo sus puntos de inflexión con los levantamientos



de Argentina en 2001, Ecuador en 2005, y nuevamente Bolivia en 2003 y 2006, entre otros hitos. En la actualidad, se destaca el despliegue de una importante ola de movilizaciones feministas, que han adquirido gran relevancia en el Cono Sur pero cuyos impactos pueden evidenciarse en varios países del continente.

En este contexto, la producción teórica sobre movimientos sociales en América Latina se ha revitalizado, emergiendo nuevos abordajes que cuestionan la aplicación acrítica de teorías formuladas para pensar otras realidades, y proponen generar conceptualizaciones propias. Estas teorizaciones han contribuido a colocar nuevas dimensiones en el análisis de los movimientos sociales latinoamericanos, como el carácter territorial de los conflictos, la emergencia de un nuevos sujetos políticos, el carácter autonómico que adquieren estas formas de movilización (Modonesi e Iglesias, 2016).

Sin embargo, el análisis de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado no ha ocupado un plano relevante en los estudios actuales, encontrándose escasos desarrollos al respecto, tanto a nivel teórico como empírico. Esto contrasta con la importancia que esta dimensión tiene para entender las dinámicas actuales de movilización. Desde la perspectiva que aquí se sostiene, el estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado es central para entender las lógicas de acción de los movimientos, particularmente en el contexto de ascenso y declive de gobiernos progresistas que recientemente se ha dado en la región. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la existencia de distintos grados de cercanía política con los gobiernos progresistas pauta dinámicas diferenciadas de movilización, confrontación y negociación (Bringel y Falero, 2016).

Partiendo de esta fundamentación, la ponencia que aquí se presenta revisa y coloca en debate los instrumentos conceptuales disponibles para el estudio de las relaciones entre movimientos sociales y política institucional. Como resultado de este recorrido, se elabora una propuesta teórica para el estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado ajustada al contexto latinoamericano actual.

La metodología empleada consiste en una revisión teórica que abarca desde las teorías clásicas hasta las contribuciones latinoamericanas recientes. Se repasan en primer lugar los aportes de los estudios de los procesos políticos (Mc Adam, Tarrow, Tilly), que colocaron el problema de la relación entre movimientos sociales y contextos políticos a través del concepto de “estructura de oportunidades políticas”. Estas teorizaciones se ponen en diálogo con la mirada constructivista de los procesos colectivos desarrollada



por Melucci. En segundo lugar, se revisan los desarrollos latinoamericanos recientes, que abren el debate en torno a las relaciones entre movimientos sociales y gobiernos progresistas, alumbrando problemáticas como la autonomía y la institucionalización de la participación. Finalmente, se retoman elementos de las distintas perspectivas para avanzar hacia una síntesis conceptual que tenga en cuenta las características del contexto.

El trabajo aquí presentado forma parte de la revisión teórica realizada en el marco de la tesis doctoral de la autora, titulada “Los movimientos sociales en el Uruguay progresista. Una aproximación al estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado en el período 2005-2019 a partir del movimiento feminista, el movimiento LGTB y las acciones colectivas vinculadas al ambiente y los bienes comunes”. Si bien la misma se circunscribe al caso uruguayo, se entiende que la construcción conceptual realizada puede ser de utilidad para pensar otros contextos con características similares. Por tratarse de un proyecto en curso, este documento recoge una síntesis preliminar, que deberá profundizarse a partir de su aplicación empírica y del debate y la crítica entre pares.

El documento comienza con una presentación de los abordajes clásicos en la materia y sus aportes al estudio de las relaciones entre movimientos sociales y política institucional, luego retoma las contribuciones latinoamericanas que provienen de los estudios sobre movimientos sociales desarrollados en las últimas décadas, y posteriormente sintetiza algunos instrumentos conceptuales para el estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado. Para culminar, se presentan algunas reflexiones finales a partir del recorrido realizado.

Los abordajes “clásicos” y sus virajes

Los estudios sobre movimientos sociales y acciones colectivas surgieron en las décadas de 1960-1970 en Europa y EEUU, buscando captar las nuevas dinámicas de movilización social que emergieron en ese contexto. De acuerdo a Gohn (1997), pueden delimitarse cuatro grandes corrientes en el estudio de la acción colectiva. En primer lugar, identifica la teoría de la movilización de recursos desarrollada en EEUU a partir de fines de los años 60 por autores como Olson, Mc Carthy y Zald, que propone entender a los movimientos sociales como grupos de interés, centrando el análisis en su capacidad de movilización de recursos. En segundo lugar, señala la teoría del proceso político o estudios centrados en las Estructuras de Oportunidades Políticas (EOP), que surgen en los años 70 también en EEUU, a partir de los trabajos de autores como Tarrow



y Tilly. Desde esta perspectiva se critica fuertemente el enfoque anterior, destacando la importancia de estudiar el contexto político en que la acción colectiva se desarrolla y analizar los factores que fomentan o desincentivan la emergencia de movimientos sociales (“oportunidades políticas”). Complementado este cuadro, Gohn señala que a partir de fines de los años 60 es posible identificar en Europa dos grandes paradigmas en el estudio de los movimientos sociales. En primer lugar, el paradigma neomarxista, que incluye los aportes de historiadores como Hobsbawm y Thompson. En segundo lugar, puede ubicarse el paradigma culturalista-accionalista o teoría de los nuevos movimientos sociales, que reúne los aportes de autores como Touraine, Melucci, Laclau y Mouffe. Desde esta perspectiva se destaca la importancia de los aspectos culturales que dan sentido a la acción colectiva y que constituyen el plano en el que actúan los movimientos sociales; a la vez que se prioriza el estudio de los procesos mediante los cuales los actores colectivos se crean y producen la acción¹.

Este trabajo parte de la teoría del proceso político, en tanto que es la corriente que más se ha enfocado en el estudio del contexto político en el que los movimientos sociales actúan. Esta perspectiva encuentra sus primeros antecedentes en los trabajos de Charles Tilly, Doug Mc Adam y Sidney Tarrow, quienes buscaron atender a la relación entre movimientos sociales y política institucional. Estos autores acuñaron el concepto de EOP para dar cuenta de contextos institucionales que favorecen o desincentivan el desarrollo de la acción colectiva y su extensión en tanto movimientos sociales (Mc Adam, Mc Carthy y Zald, 1999). La idea de EOP es compleja, dentro de ella los autores han enfatizado distintas dimensiones, entre las que se incluyen el grado de apertura o cierre de los sistemas políticos, la inestabilidad electoral, la disponibilidad de aliados influyentes, la tolerancia de las élites hacia la protesta (Della Porta y Diani, 2015).

De acuerdo a Tarrow (2009), el primer autor en desarrollar esta perspectiva fue Charles Tilly a partir de su trabajo “From Mobilization to Revolution” publicado en 1978. Allí se centra por primera vez la mirada en los factores del contexto político que favorecen la movilización colectiva, destacándose como aspectos relevantes la oportunidad o amenaza para quienes plantean el desafío y la permisividad o represión de las autoridades. Desde una mirada estructural, Tilly relacionó el desarrollo de los movimientos sociales con las características del Estado y sus mutaciones. También en este contexto, varios autores norteamericanos abordaron la relación entre las diversas formas de protesta y las políticas nacionales y locales. Unos años después, Doug Mc Adam sintetizó estos enfoques en un modelo del proceso político plenamente



desarrollado a partir de su texto “The political process and the development of the black insurgency” publicado en 1982 (Tarrow, 2009).

Una de las formulaciones más sólidas de este enfoque es la realizada por Tarrow (2009), quien desarrolla en profundidad el concepto de oportunidades y lo integra en un marco teórico general para el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales. Para este autor, el concepto de EOP refiere a dimensiones del entorno político –no necesariamente formales ni permanentes- que favorecen o desincentivan la acción colectiva. De acuerdo a Tarrow (2009), el concepto de oportunidades se descompone en varias dimensiones, entre las que se incluyen el incremento del acceso al poder, la inestabilidad de los alineamientos políticos, las divisiones y conflictos entre las élites, la disponibilidad de aliados influyentes. Además de las oportunidades, que constituyen aspectos relativamente cambiantes del entorno político, existen aspectos más estables del binomio oportunidades-restricciones que condicionan la acción política colectiva. Entre estos, se encuentran la relativa fortaleza o debilidad del Estado, las estrategias dominantes que éste utiliza contra quienes desafían su poder (incluyentes o excluyentes) y la forma e intensidad con que éste utiliza la represión y el control social.

El advenimiento del siglo XXII y los cambios en las formas de contestación social estuvieron acompañados por una fuerte renovación teórica al interior del enfoque del proceso político, que resultó en un viraje del estudio de las estructuras de oportunidades al estudio de la política contenciosa o de la contienda política (Alonso, 2009). Mc Adam, Tarrow y Tilly redefinieron su objeto de estudio como la “contienda política”, en vez de la tríada “movimientos sociales, revoluciones y acción colectiva”, buscando relacionar los movimientos sociales, los ciclos de protesta y las revoluciones entre sí, con la política institucional y con el cambio social (Mc Adam, Tarrow y Tilly; 2009). Se realiza, de este modo, un viraje del análisis de las estructuras al estudio de procesos y mecanismos causales que contribuyen a explicar las dinámicas de la contienda política (Bringel, 2011).

Esta teoría ha sido una de las más influyentes a nivel global en el estudio de los movimientos sociales desde su formulación hasta la actualidad, siendo permanentemente discutida y reelaborada. Una de las críticas más relevantes es la planteada por Melucci (1994). Desde una mirada constructivista, este autor cuestiona el reduccionismo implícito en el hecho de observar acciones conflictivas, desconociendo el modo en que éstas se construyen a través de un proceso interactivo de elaboración de significados y creación de relaciones sociales que sostienen la acción. Para él, la



acción colectiva es el resultado de múltiples procesos mediante los cuales se forman orientaciones para la acción y sistemas de relaciones sociales que permiten sostener esa acción. En esos procesos los actores producen significados, comunican, negocian y toman decisiones; y de ese modo van creando su identidad colectiva.

La polémica planteada por Melucci pone el acento en los procesos de construcción de sentido que se dan al interior de las organizaciones y de las relaciones que los sostienen. En este trabajo se retomará esa dimensión y se buscará articularla con el estudio de las relaciones que los movimientos establecen con el gobierno y el Estado. En lugar de mirar como dimensiones separadas las relaciones con el sistema político y los procesos de construcción de orientaciones para la acción, se buscará observar el modo en que los movimientos interactúan con su entorno político y, en ese proceso, van construyendo y disputando el horizonte político que da sentido a sus acciones.

Las contribuciones latinoamericanas

A nivel de América Latina los estudios sobre movimientos sociales han tenido un desarrollo particular. Durante las décadas en que en Europa y EEUU empezaban a realizarse estudios sobre movimientos sociales, varios países de latinoamericanos atravesaban procesos dictatoriales que reprimieron toda forma de movilización social. Es recién en la década de los 80 con las reaperturas democráticas cuando lentamente empiezan a emerger nuevas formas de asociación y movilización. En este contexto comienzan a desarrollarse los estudios sobre movimientos sociales en la región, que desde el punto de vista teórico estuvieron fuertemente influenciados por la teoría europea de los NMS (Gohn, 1997).

A partir del año 2000 es posible identificar en América Latina el despliegue de un nuevo ciclo de protestas, que despertó el interés de los y las analistas en la temática. En este contexto, en las dos últimas décadas la producción teórica sobre movimientos sociales en América Latina se ha revitalizado, emergiendo nuevos abordajes que cuestionan la aplicación acrítica de teorías formuladas para pensar otras realidades y buscan generar propuestas teóricas propias (Seoane, Taddei y Algranati, 2011). Distintos autores y autoras han elaborado debates y conceptos orientados específicamente a entender las dinámicas de movilización social latinoamericana, trabajando nociones como la de territorialidad, comunidad, autonomía (Modonesi e Iglesias, 2016).

En estos desarrollos se identifican contribuciones hacia el estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobiernos y Estado en la región. En particular, el debate en torno a la autonomía aborda este problema con la mirada centrada en los movimientos



sociales. De acuerdo a Modonesi e Iglesias (2016), la autonomía como uno de los rasgos característicos de los movimientos sociales latinoamericanos de las últimas dos décadas. Para estos autores la idea de autonomía se plantea en los estudios contemporáneos haciendo referencia a dos niveles: por un lado como independencia de los partidos políticos y los gobiernos, y por tanto como la preservación de espacios de decisión propios de los movimientos. Por otro lado, la autonomía aparece como la capacidad de los movimientos de producir sus propias condiciones de vida, resolviendo en forma autogestionaria necesidades como la educación, salud y vivienda. En este sentido, los movimientos latinoamericanos son teorizados como espacios capaces de producir nuevas relaciones sociales, impulsando transformaciones que van más allá de lo estatal. La búsqueda de autonomía y el desarrollo de prácticas autogestionarias se relacionan con la emergencia de una nueva política, menos preocupada por incidir en el Estado y más orientada a desarrollar formas de democracia directa o participativa (Modonesi e Iglesias, 2016).

El creciente protagonismo de los movimientos sociales latinoamericanos y su relación con los gobiernos progresistas que comenzaron a instalarse en la región ha motivado un debate en torno a los horizontes políticos contenidos en la práctica de los movimientos sociales latinoamericanos. Esta polémica es caracterizada por Modonesi e Iglesias (2016) como el debate entre autonomismo y hegemonismo, y según los autores constituye el debate político más álgido del cambio de época en América Latina. De un lado, autores como Holloway (2010) señalan que los movimientos sociales constituyen una estrategia política de transformación a partir del desarrollo de prácticas autogestionarias basadas en la democracia directa, lo que les permite “cambiar el mundo sin tomar el poder”. Desde una perspectiva similar, Gutiérrez (2017) destaca el modo en que estos movimientos constituyen una horizonte de transformación más allá del Estado a partir de la producción de entramados comunitarios que permiten sostener la reproducción de lo común. En contraposición a este argumento, autores como García Linera (2008) defienden la necesidad estratégica de disputar el Estado desde un proyecto nacional popular del cual los gobiernos progresistas son expresión (Modonesi e Iglesias, 2016).

Por otra parte, puede identificarse en el debate latinoamericano contemporáneo una aproximación de matriz institucionalista más cercana a la Ciencia Política, que enfatiza los efectos de los movimientos sociales en las políticas públicas, la cual se observa en trabajos como los de Carlos, Dowbor y Albuquerque (2017). Esta mirada se ha



desarrollado en la región en el contexto de la emergencia de gobiernos progresistas. Retomando la teoría de la polis de Scokpol, estas autoras analizan los tipos de Estado y los encajes institucionales, es decir el proceso de acceso de algunos actores a la esfera estatal y de influencia en las políticas públicas. Carlos, Dowbor y Albuquerque (2017) plantean una fuerte crítica a la mirada dicotómica que analiza movimientos sociales y Estado en tanto esferas separadas, presente en las propuestas teóricas de Tilly, Tarrow y Mc Adam. Señalan la importancia de analizar las interacciones que se dan entre ambos a través de las instituciones, argumentando que los movimientos no pueden ser reducidos a la política de la confrontación, enfatizando el modo en que éstos combinan acciones institucionalizadas y no institucionalizadas. De este modo, se distancian de las posturas que analizan los efectos de la institucionalización de los movimientos sociales como cooptación, desmovilización y desradicalización de las demandas.

Finalmente, existen algunos trabajos que ponen el acento en el estudio de las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado. En esta línea de pensamiento, pueden ubicarse los aportes de Bringel (Bringel 2011 y 2012, Bringel y Etchart, 2008), quien plantea la necesidad de establecer un diálogo con los estudios de la contienda política, retomando elementos de autores como Tarrow y Tilly. El autor señala que es necesario refinar las herramientas de análisis para entender los mecanismos particulares que conectan movimientos sociales y partidos políticos en América Latina (Bringel, 2011). Propone analizar la cuestión de la autonomía y la institucionalización a partir de la dialéctica entre el carácter instituido e instituyente de los movimientos sociales, donde en el primer nivel puede ubicarse la política de la demanda orientada a transformar los sistemas políticos y en el segundo las experiencias autónomas de los movimientos, que crean espacios propios que van más allá de lo instituido y lo tensionan en un sentido transformador (Bringel y Etchart, 2008). Paralelamente, coloca la necesidad de observar el modo en que los estados combinan llamados a la participación de la sociedad civil con prácticas de criminalización y represión hacia los movimientos más conflictivos (Bringel, 2011). En sintonía con esta perspectiva, Bringel y Falero (2016) abordan el estudio de las luchas sociales que emergieron en América Latina en los últimos años, sus relaciones con los gobiernos progresistas y las transformaciones del Estado. Estos autores elaboran una tipología de relaciones entre movimientos sociales y gobiernos donde se establecen cuatro tipos de conexiones posibles: subordinada, negociada, discontinuada y desconexión. En el primer caso se mantienen relaciones fuertes entre gobierno, partido y movimientos, existiendo una separación difusa entre los espacios de



actuación. En el segundo caso se da un control puntual sobre algunos miembros de los movimientos, aunque no del agente colectivo como un todo. En el tercero los movimientos oscilan entre momentos de mayor compromiso con los gobiernos y momentos de mayor confrontación y movilización. Finalmente, la situación de desconexión con gobiernos y presencia débil o inexistente de partidos supone una mayor autonomía pero dificulta las posibilidades de establecer negociaciones como recurso para avanzar en las demandas del movimiento (Bringel y Falero, 2016).

Para el desarrollo de la presente investigación se tomará como referencia principal esta última línea de trabajo, que parte del estudio de los movimientos sociales pero pone el énfasis en las relaciones que estos mantienen con los agentes de la política institucional y en los impactos que esto tiene en el despliegue de los movimientos. Complementariamente, se retomarán los debates que abordan la noción de autonomía y el papel del Estado y los gobiernos progresistas en las estrategias de transformación desarrolladas por los movimientos, en el entendido de que esta dimensión contribuye a explicar las distintas formas en que éstos se relacionan con los agentes de la política institucional.

Hacia una síntesis que tenga en cuenta las características del contexto

Retomando los debates anteriormente expuestos, señalaremos aquí algunas claves para pensar las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado en el contexto de los progresismos latinoamericanos.

Las relaciones como límites y oportunidades

Retomando contribuciones de la teoría del proceso político y sus reelaboraciones, sostenemos aquí que en lugar de observar las estructuras políticas institucionales como un componente estático de la acción colectiva, debe colocarse la mirada en el estudio de las relaciones que conectan en forma variada movimientos sociales y partidos en América Latina, y en el modo en que estas impactan en las distintas luchas. Complementariamente, resulta clave prestar atención a las formas en que los distintos gobiernos y Estados combinan estrategias de represión, diálogo, negociación e integración de las distintas luchas sociales, produciendo límites y oportunidades para la acción.

Las relaciones y los procesos de elaboración de sentidos

Como se ha señalado, las teorías del proceso político ponen el acento en las relaciones entre movimientos sociales y esfera institucional, y sus efectos son analizados en términos de la capacidad de las acciones colectivas de obtener conquistas. Mientras



que la perspectiva constructivista (Melucci, 1994) enfatiza el estudio de los procesos de construcción de sentido que se dan al interior de las organizaciones. En este trabajo se propone articular ambas miradas, entendiendo a las relaciones que los movimientos establecen con la esfera institucional como espacio de producción de significados y orientaciones para la acción. El proceso de elaboración y simbolización mediante el cual se producen los horizontes de transformación que dan sentido a la acción de los movimientos sociales es relacional, se construye a partir de interacciones con el sistema político²

Entender las relaciones en el contexto de los Estados latinoamericanos

Los aportes de Tarrow han sido claves para entender la importancia de los Estados en las luchas sociales, incluso en el contexto de la globalización (Bringel, 2011). Estas contribuciones deben profundizarse incorporando la mirada latinoamericana. A la hora de analizar los movimientos sociales y sus relaciones con el sistema político en América Latina debe tenerse en cuenta la particular inserción de la región en el sistema mundo capitalista y los condicionamientos que desde allí se imponen hacia los gobiernos y Estados, los cuales atravesarán sus vínculos con los movimientos. En este contexto, la permeabilidad de los Estados hacia determinados reclamos y sus vínculos con los movimientos estarán afectados por condicionamientos externos y agendas globales, que varían en los distintos temas³.

Entender las relaciones desde su historia

En los estudios clásicos del proceso político se observa a la acción colectiva y la esfera de la política institucional como ámbitos separados. Si se analiza lo acaecido en América Latina en los últimos veinte años, se observa un ascenso al poder de partidos que en muchos casos mantienen fuertes vínculos con los movimientos sociales, ya sea que éstos fueran creados en el último ciclo de luchas o en contextos anteriores (Falero, 2008). En este marco, las relaciones entre movimientos sociales y gobierno muchas veces son estrechas en términos políticos y programáticos, lo que reconfigura la práctica política de los movimientos sociales. En este contexto, emergen los debates en torno a la importancia de no exigir más de lo que los gobiernos pueden conceder sin desestabilizarse, lo que genera fisuras dentro de los propios movimientos e impone límites su capacidad de generar alternativas de transformación social.

Reflexiones finales

En este breve recorrido se buscó identificar las herramientas conceptuales que, desde los estudios sobre movimientos sociales y acción colectiva, se han producido para



entender las relaciones que éstos establecen con gobiernos y Estados y el modo en que éstas impactan en el despliegue de los mismos.

La revisión de los enfoques clásicos del proceso político, de los debates que actualmente se dan al interior de esta teoría y de las contribuciones latinoamericanas desarrolladas en las últimas décadas coloca la necesidad de revisar algunos elementos para entender el contexto latinoamericano actual, donde las relaciones aparecen como una dimensión clave para comprender las luchas sociales.

A partir del recorrido realizado, colocamos aquí la importancia de entender las relaciones entre movimientos sociales, gobierno y Estado en forma dinámica, observando cómo los primeros combinan luchas que se inscriben dentro de los límites de la política institucional y luchas que ponen en tensión estos límites, proponiendo nuevas ideas de sociedad. Y analizando cómo los segundos combinan estrategias de integración de estos reclamos con estrategias de invisibilización y represión. En estos vínculos no se juega solamente la posibilidad de obtener conquistas en términos de derechos, sino también de elaborar y difundir horizontes alternativos de transformación social.

Notas

¹ Hasta el inicio de la década de 1980, el debate entre paradigmas dominó las discusiones en el campo de los estudios sobre movimientos sociales y acciones colectivas (Alonso, 2009). A partir de entonces, el diálogo entre estos enfoques comenzó a darse en forma cada vez más fluida (Della Porta y Diani, 2015), de manera que en la actualidad resulta artificial hablar de escuelas o paradigmas, más bien deberíamos hablar de perspectivas teóricas con énfasis diferenciados, pero también con importantes niveles de intercambio.

² A modo de hipótesis, podemos proponer la idea de que los movimientos que detentan una mayor cercanía con el gobierno tienen mayores posibilidades de obtener conquistas, pero pierden capacidades de crear horizontes de transformación más allá de lo instituido. Paralelamente, los gobiernos establecerán una disputa simbólica por redefinir los reclamos sociales en el lenguaje de las transformaciones institucionales, es decir por enmarcarlos dentro de los límites de lo que están dispuestos a conceder.

³ Por ejemplo para el caso uruguayo se observa en la actualidad una alta permeabilidad del Estado a demandas vinculadas con la agenda de género y los derechos de las personas LGTB, de acuerdo a la importancia que estos temas tienen en agenda global, pero se observa una combinación de estrategias represivas y de invisibilización a las



luchas que se oponen al extractivismo, en tanto que estas afectan compromisos firmados por el Estado uruguayo con empresas transnacionales.

Bibliografía

Alonso, A. (2009). As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. *Lua Nova*, Sao Paulo, 76, 49-86. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/ln/n76/n76a03.pdf>

Bringel, B. (2011). A busca de uma nova agenda de pesquisa sobre os movimentos sociais e o confronto político: diálogos con Sidney Tarrow. *Política y sociedade* 10 (18), 51-73. DOI <https://doi.org/10.5007/2175-7984.2011v10n18p51>

Bringel, B. (2012). Com, contra e para além de Charles Tilly: mudanças teóricas no estudo das ações coletivas e dos movimentos sociais. *Sociologia y antropología* 02 (03), 43-67. DOI 10.1590/2238-38752012v233

Bringel, B. y Etchart, E. (2008) Movimentos sociais e democracia: o dois lados das fronteiras. *Caderno CRH* 21 (54), 457-475. DOI <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-49792008000300004>

Bringel, B. y Falero, A. (2016). Movimientos sociales, gobiernos progresistas y Estado en América Latina: transiciones, conflictos y mediaciones. *Caderno CRH* 29 (03), 27-45. DOI <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-49792016000400003>

Carlos, E., Dowbor, M. y Albuquerque, M. (2017). Movimentos sociais e seus efeitos nas políticas públicas. Balanço do debate e proposições analíticas. *Civitas*, 17 (02), 360-378. DOI <http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2017.2.25925>

Della Porta, D. y Diani, M. (2015). *Los movimientos sociales*. Madrid: Universidad Complutense y CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas).

Gohn, M. (1997). *Teorías dos movimentos sociais. Paradigmas clássicos e contemporâneos*. San Pablo: Loyola.

García Linera, A. (2008). *La potencia plebeya. Acción colectiva a identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*. Buenos Aires: CLACSO - Prometeo.

Gutiérrez, R. (2017). *Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas*. Madrid: Traficantes de sueños.

Falero, A. (2008). *Las batallas por la subjetividad: luchas sociales y construcción de derechos en Uruguay. Una aproximación desde la teoría sociológica*. Montevideo: CSIC – Fanelcor.

Holloway, J. (2010). *Cambiar el mundo sin tomar el poder: el significado de la revolución hoy*. Buenos Aires: Herramienta.



Mc Adam, D., Mc Carthy, J. y Zald, M. (1999). Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales. En Mc Adam, Mc Carthy y Zald (eds.) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (p. 21-46). Madrid: Istmo.

Mc Adam, D., Tarrow, S. y Tilly, C. (2001). *Dynamics of contention*. New York: Cambridge University Press.

Mc Adam, D., Tarrow, S. y Tilly, C. (2009). Para mapear o confronto político. *Lua Nova*, Sao Paulo, 76, 11-48. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/ln/n76/n76a02.pdf>

Melucci, A. (1994). Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales. *Zona Abierta* 69, 153-180. Madrid: Pablo Iglesias.

Modonesi, M. e Iglesias, M. (2016). Perspectivas teóricas para el estudio de los movimientos sociopolíticos en América Latina: ¿cambio de época o década perdida?. *De Raíz Diversa* 3 (5), 95-124. Recuperado de <https://bit.ly/2LpSY9l>

Seoane, J., Taddei, E. y Algranati, C. (2011). El concepto de 'movimiento social' a la luz de los debates y la experiencia latinoamericana recientes. *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 4 (3), 1-31. Recuperado de <https://bit.ly/38luYnB>

Svampa, M. (2010). Movimientos sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina. *Working Papers 01/2010*, Kassel, Universitat Kassel. Disponible en <https://bit.ly/35hjvwG>

Tarrow, S. (2009). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza editorial.



Ocupación colectiva como medio de superación del Apartheid Ocupacional: El caso de la lucha por el derecho a la salud de la Agrupación Mama Cultiva¹.

Cristian Mauricio Valderrama Núñez
Alejandro Hermosilla
Sofía Sepulveda
Michelle Roa Riffo
Camila Reyes Martinez

Resumén

El objetivo de este artículo es hacer visibles las prácticas realizadas por la Ocupación Colectiva Mama Cultiva, para defender el derecho al acceso a la salud, que estaría limitado por un contexto de apartheid ocupacional. Se realizó una investigación cualitativa, con un enfoque fenomenológico, en la que la información se produce mediante entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión, con 6 participantes. La información obtenida se organiza a través de una matriz categorial y se analiza a través de categorías simples. La conclusión principal es que las prácticas de resistencia están fuertemente arraigadas en una identidad colectiva. Esto se relaciona con las experiencias compartidas de los sujetos del grupo, especialmente aquellos asociados con la experiencia del malestar psicosocial causado por la estigmatización, la criminalización y la medicalización prevalente.

Palabras clave

Derecho a la Salud; Marginación Social; Sistemas de Salud.

Resumo

O objetivo deste artigo é tornar visíveis as práticas utilizadas pela Ocupação Coletiva da Mama Cultiva para exercer o direito à saúde, o que seria limitado por um contexto de apartheid ocupacional. Neste estudo optou-se por pesquisa qualitativa, com abordagem fenomenológica, na qual a informação é produzida por meio de entrevistas semiestructuradas e grupos de discussão, com 6 participantes do grupo. A informação obtida é ordenada através de uma matriz categorial e é analisada através de categorias simples. A principal conclusão é que as práticas de resistência estão fortemente enraizadas na identidade coletiva. Isto está relacionado às experiências compartilhadas pelos sujeitos do grupo, especialmente aqueles associados à experiência de sofrimento psicosocial causado pela estigmatização, criminalização e a medicalização prevalente.

**Palavras chave**

Direito à Saúde; Marginalização Social; Sistema de Saúde.

Abstract

The objective of this article is to turn the practices used by *Occupação Coletiva da Mama Cultiva* visible to advocate to the right to access health, which would be limited by a context of occupational apartheid. A qualitative research was carried out, with a phenomenological approach, in which the information is produced by semi-structured interviews and discussion groups, with 6 groups participants. The information obtained is organized through a categorical matrix and analyzed through simple categories. The main conclusion is that the resistance practices are strongly rooted in a collective identity. This is related to the shared experiences of group individuals, especially those associated with the experience of psychosocial suffering caused by stigmatization, criminalization and prevalent medicalization.

Keywords

Right to Health; Social Marginalization; Health Systems.

Introducción

Este artículo da cuenta del trabajo desarrollado por la Agrupación Mamá Cultiva Concepción, organización en la que participan padres y madres que buscan mejorar la calidad de vida y salud de sus hijos y familiares, a través de medicina (aceite) de cannabis que se obtiene del autocultivo.

Este trabajo emerge como una necesidad de visibilizar la lucha que desarrolla esta organización para alcanzar sus propósitos, dado que existen una serie de obstáculos, entre los que se pueden mencionar la estigmatización, criminalización y medicalización. Este conjunto de impedimentos al encontrarse articulados a nivel cultural, social y legal podrían, constituir la estructura de apartheid ocupacional, que produciría al mismo tiempo injusticia ocupacional, en tanto, existe un acceso limitado al ejercicio pleno del derecho a la salud de los niños y niñas, que pertenecen a esta organización.

Este artículo, comienza exponiendo una breve revisión histórica, en torno al uso medicinal de cannabis, y el surgimiento del prohibicionismo; luego, se describen, lo que a juicio de los autores, son los elementos presentes en Chile, que determinan una



condición de apartheid ocupacional, entre los que podemos mencionar: la legislación, el modelo médico hegemónico y la estigmatización/ criminalización.

Finalmente, se describen las prácticas que desarrollan, los integrantes de la agrupación, para superar la injusticia ocupacional, y modificar las condiciones sociales, culturales y legales que se consideran, en este documento, constitutivas del Apartheid Ocupacional.

Para desarrollar la investigación, los autores se incorporaron a las actividades cotidianas que desarrolla la agrupación para generar vínculo y comprender las dinámicas propias del grupo y sus participantes, esto implicó incorporarse a reuniones, marchas, cursos, entre otras. Inicialmente los investigadores cumplían un rol de observadores y acompañantes, con el tiempo, fueron adquiriendo roles distintos a partir de las necesidades que la agrupación planteaba a éstos, de tal forma que comenzaron a asumir una condición de participantes activos, organizadores de actividades y encargados de otras.

Para efectos de la investigación, se desarrollaron grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas para producir la información, métodos orientados a describir las prácticas que desarrolla la ocupación colectiva Mamá Cultiva, para alcanzar el derecho pleno a la salud, en un contexto de apartheid ocupacional.

El derecho a la salud, en este estudio, se entenderá como el derecho a la protección de la salud, al cuidado de la salud y condiciones saludables, así como también, el derecho a la salud implica la libertad de tener control sobre nuestras propias vidas, y a el derecho a estar libre de tratamientos médicos no deseadas (Figueroa García-Huidobro, 2013).

Breve historia de la Cannabis: Hacia la criminalización y estigmatización

Para comprender las dificultades de la agrupación Mamá Cultiva, es necesario realizar un breve recorrido histórico sobre la relación del uso medicinal del cannabis y la sociedad, el cual ha estado generalmente vinculado a leyes, medios de comunicación y publicaciones científicas, quienes actualmente continúan deslegitimando y poniendo en tela de juicio valórico el uso del cannabis, producto de lo cual se produce estigmatización y acciones punitivas para quienes la utilizan, como se expresará a continuación.

Ramos y Fernández (2000) desarrollan una descripción del uso medicinal del cannabis, relatando que los primeros registros encontrados proceden desde China, alrededor del 2.600 a.C. donde el emperador Huan Ti en su libro “NeiChing”, relata sobre los posibles usos del cannabis en aplicaciones médicas; también se tienen registros de la India, cuya utilización se enfoca hacia costumbres religiosas.



En la Europa del siglo XIX, las propiedades curativas del cannabis se hacen populares, en tratamientos de la rabia, reumatismo, epilepsia y el tétano. También se obtuvieron resultados positivos, en las convulsiones infantiles.

Si bien los resultados positivos de los tratamientos en base a la “tintura de cannabis” (resina de cannabis disuelta en etanol) aportaron a la utilización medicinal en Europa, la gran controversia causada por sus efectos alucinógenos sobre el cerebro y posibles efectos adversos, investigados ampliamente por otros médicos como Moreau (Ramos; Fernández, 2000) que se oponían a su uso, generó prohibición. En el “Acta de Drogas de Abuso” del año 1932, se prohíbe una serie de plantas medicinales, censurando sus aplicaciones de los libros de medicina de la época. Esta situación vislumbra la influencia del saber médico, en el prohibicionismo del cannabis. Situación que, según esta investigación, se sigue sosteniendo.

Cabe mencionar, que durante esta época se comienza la síntesis de opiáceos, como la morfina y heroína, así como de analgésicos como la aspirina y barbitúricos. Estos fármacos al ser desarrollados artificialmente tienen una alta confiabilidad para la medicina tradicional, de esta forma se vuelven los principales en los tratamientos contra el dolor, desplazando así a la medicina natural, contribuyendo aún más, a la prohibición del cannabis.

Para efectos de esta investigación, es relevante comprender que estos hechos son expresiones de lo que entendemos como modelo médico hegemónico, el cuál Menéndez (1988) define como

El conjunto de prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde fines del siglo XVIII ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender la enfermedad legitimada tanto por criterios científicos, como por el Estado (Menéndez, 1988, p. 451).

Este modelo reconoce todo conocimiento y formas de tratamiento que estén basados en la evidencia científica, situación que Mamá Cultiva no comparte y que, por el contrario, releva que sus saberes, se encuentran más bien vinculados a la experiencia vivida, a la práctica de sanación inmediata y colectiva.

En tal sentido, la disputa que se produce en el encuentro entre el Modelo Médico hegemónico y la ocupación colectiva Mamá Cultiva, está vinculada a lo que Santos



(2006) denomina la sociología de las ausencias, a través de la monocultura del saber, la cual significa validar solo el conocimiento científico, como el único saber legítimo, que en este caso correspondería a los tratamientos de la medicina alopática, al mismo tiempo, se deslegitima y anula otros saberes, para esta situación, el uso medicinal del cannabis.

El caso de Latinoamérica y Chile

El cannabis llega a América Latina, a través del proceso de colonización de América durante el siglo XVI. Si bien, el cannabis era usado libremente de manera medicinal, rápidamente se generó un prohibicionismo en su uso. Al respecto, García-Robles (2015) indica que este prohibicionismo, se debe a intereses económicos de magnates estadounidenses, que, durante las primeras décadas del siglo XX, veían que el cáñamo mexicano, se podía usar como materia prima para la producción de papel y combustible. Además, de que sus propiedades medicinales presentaban una amenaza, para los intereses de la industria farmacéutica.

La Sáenz Rovner (2007) señala que, en Colombia, por ejemplo,

El Federal Bureau of Narcotics (FBN), la agencia federal norteamericana a cargo de la represión del narcotráfico, estaba detrás de los esfuerzos para criminalizar la marihuana, anunciándola como una droga que inducía a la violencia entre los que la fumaban (La Sáenz Rovner, 2007, p. 208).

En el caso de Chile, según La Sáenz Rovner (2007) ante el escenario político y social de la guerra fría, EEUU presiona para generar una ley que sancione el consumo de Cannabis, lo cual provocó que, en el año 1969, se llevara a cabo el primer juicio relacionado con el consumo de cannabis en Chile.

Actualmente en Chile, al igual que en el resto de los países de América Latina, la ciudadanía ha puesto en la palestra la despenalización del uso del cannabis, tanto en forma recreacional como medicinal. Varias organizaciones nacionales y regionales se encuentran realizando acciones que promuevan la despenalización en el uso terapéutico, entre ellas Cannabis Chile, Mamá Cultiva y Fundación Daya, específicamente demandan la modificación de la ley 20.000 (Biblioteca..., 2005), que entre sus indicaciones más limitantes se encuentran las siguientes:

Si una persona planta, cultiva o cosecha sin autorización plantas del género cannabis se arriesga a penas de multa entre 40 y 400 UTM y prisión de tres a veinte años, salvo que demuestre que esa planta es para consumo personal y próximo en el tiempo



Esta normativa plantea que se puede realizar consumo personal y privado de cannabis, pero no se puede cultivar ni mucho menos comprar, vender o regalar, lo que está sancionado por la ley, con multa o cárcel, tal como señala Sánchez (2012), esta ley establece que el uso de estupefacientes es indispensable para mitigar el dolor humano, cuestión que la ley 20.000 recoge, no así la forma de acceso a la sustancia.

Uso medicinal del cannabis: Apartheid ocupacional, injusticia ocupacional y ocupaciones colectivas

Chile aún se encuentra en situación de criminalización del uso de la planta y por ello no es posible para este grupo acceder al derecho a la salud plena, restringiendo este derecho solo al acceso a la salud tradicional, la cual no da respuestas a sus problemáticas. Los autores de este texto, sostienen que la agrupación Mama Cultiva, y sus integrantes, no pueden acceder libremente al uso medicinal del cannabis, a través del autocultivo; dado que, en Chile, se encuentran en una condición de apartheid ocupacional:

[...] la segregación de grupos de personas mediante la restricción o negación de su acceso a una participación digna y significativa en las ocupaciones de la vida diaria, basada en la raza color, discapacidad, procedencia nacional, edad sexo, orientación sexual, religión, creencias políticas, u otras características. Ocasionado por fuerzas políticas, sus consecuencias sociales, culturales y económicas sistemáticas y dominantes, ponen en peligro la salud y el bienestar de individuos, comunidades y sociedades (Kronenberg; Simo; Pollard, 2007, p. 66).

Tal como propone, Vargas, Olivares y Fernandez (2016), dado lo general y amplio del concepto de apartheid ocupacional, resulta necesario especificar qué condiciones son las que generan apartheid ocupacional y en qué grupo de personas o grupos específicamente.

Por tal razón para efectos de esta investigación se establece que las condiciones que producen el apartheid ocupacional en la Agrupación Mamá Cultiva, Fundación Daya, Cannabis Chile, Red de Usuarios de Cannabis (RUCA) y Cultiva Tus Derechos, y otras organizaciones, así como otros padres y madres que buscan alternativas al tratamiento tradicional, son un sistema de elementos que en su conjunto y coordinadamente, limitan el ejercicio pleno del derecho a la salud de los niñas y niños que pertenecen a ésta.



Este sistema está constituido por la legislación vigente que restringe el uso medicinal del cannabis y criminaliza a los padres que la cultivan; por el modelo médico hegemónico que deslegitima los beneficios que otorgaría el cannabis medicinal en el tratamiento de los problemas de salud de los niños y niñas; y, por último, la estigmatización sobre aquellos padres que la usan en sus hijos e hijas, dado que esta se considera una droga dañina para la salud.

Las condiciones que generan apartheid Ocupacional recién descritas, se materializan en la limitación al ejercicio del derecho pleno a la salud de los Niños y Niñas, que pertenecen a la agrupación Mamá Cultiva, para la investigación esto constituye una expresión de Injusticia Ocupacional, que se entiende, como señala Kronenberg, Simó y Pollard (2007), ocurre cuando la participación en la ocupación, en este caso el acceso al derecho pleno a la salud, se limita de cualquier modo. Las injusticias ocupacionales ocurren en el marco de la existencia de apartheid ocupacional.

Es fundamental para esta investigación, el concepto de ocupación colectiva y la vinculación que desarrollan los autores, en cuanto a comprender y definir ontológicamente como una ocupación colectiva a la Agrupación Mamá Cultiva. Palacios (2013) señala que las ocupaciones colectivas son aquellas ocupaciones que pueden brindar cohesión, sentido de comunidad, bienestar, pertenencia e identidad social, a partir de las lógicas de participación puede generar una sensación de bienestar en la comunidad, ligada a un sentido de pertenencia, fortaleciendo la comunidad y la propia organización social.

Por su parte, Ramugondo y Kronenberg (2015), definen las ocupaciones colectivas como

[...] ocupaciones que realizan individuos, grupos, comunidades y/o sociedades en contextos cotidianos; estos pueden reflejar una intención hacia la cohesión social o la disfunción, y / o el avance o la aversión a un bien común (R Amugondo; Kronenberg, 2015, p. 10),

En este caso, la agrupación Mamá Cultiva se organiza en función del malestar que provoca una enfermedad que no encuentra solución con los tratamientos del Modelo Médico hegemónico, su intencionalidad es modificar el estado de salud de sus hijos e hijas, con el propósito de alcanzar su bienestar psicosocial. En ese proceso se van desarrollando, lo que plantea Palacios (2017)



[...] cohesión en torno al bienestar o al malestar, cuando el valor de estar juntos es por el bien común, o bien, cuando el estar juntos nos hace conscientes del malestar [...]
(Palacios, 2017, p. 35).

Que en caso de la agrupación Mamá Cultiva corresponden a formas de ser, estar y hacer situadas históricamente en el contexto de apartheid ocupacional ya descrito.

Otro elemento fundamental para considerar a la Agrupación Mamá Cultiva como una ocupación colectiva, tiene relación a lo que plantea Simaan (2017) quien propone en su estudio sobre el cultivo de Olivos en Palestina, que las ocupaciones colectivas son una práctica de resistencia ante las injusticias. En este sentido, las ocupaciones colectivas tendrían características de una práctica social intencionada, es decir como plantea Cohen et al. (1988) serían una expresión de resistencia producto de una experiencia compartida de malestar social, atribuible a necesidades colectivas no resueltas en el ámbito público o privado y/o a una percepción de injusticia, se construye en la interacción social, e implica visibilización y confrontación de las demandas con un adversario.

Dicho lo anterior, la ocupación colectiva Mamá cultiva se organiza de una forma determinada, para responder y superar las injusticias ocupacionales, es decir, la limitación al ejercicio pleno del derecho a la salud, en un contexto de apartheid ocupacional, que, en este caso, está determinado por la criminalización, estigmatización y medicalización imperante en el tratamiento de las enfermedades.

La pregunta de investigación que emerge a partir de esta situación es: ¿Cuáles son las prácticas que desarrolla la ocupación colectiva Mamá Cultiva, para alcanzar el derecho pleno a la salud, en un contexto de apartheid ocupacional?

Metodología

El tipo de estudio es cualitativo, en el cual:

[...] el investigador se pregunta qué piensa realmente la gente sobre esta situación concreta, cómo vive o experimenta un cambio en sus hábitos y costumbres, cómo se siente ante los hechos de su entorno, cuáles son las imágenes que subyacen a sus elecciones y qué temores o expectativas le generan las transformaciones en su realidad cotidiana (Vieytes, 2004, p. 613).

Esto se evidencia en que se analizará la Agrupación Mamá Cultiva a partir del discurso de sus participantes, en el cual se verá plasmado el devenir de su realidad.



El enfoque de la investigación es fenomenológico, como menciona, Rodríguez, Gil y García (1996):

[...] la investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la vida, de la cotidianidad. Lo cotidiano, en sentido fenomenológico, es la experiencia no conceptualizada o categorizada [...] (Rodríguez; Gil; García, 1996, p. 3).

Este enfoque de investigación se justifica en tanto, el grupo de investigadores ha estado con los y las participantes desde inicios de 2016 a la fecha, lo que ha permitido comprender los significados de los participantes, de la experiencia de ser parte de la ocupación colectiva Mama Cultiva y así, describir las prácticas orientadas a alcanzar sus objetivos.

Los participantes del estudio son 6 madres y padres de la Ocupación colectiva Mamá Cultiva, quienes tienen en común un hijo, hija o familiar diagnosticados con epilepsia refractaria, síndromes extraños y otras alteraciones neurológicas (actualmente acompañan a adultos y familias con diversos tipos de patologías, dolor crónico, parkinson, artrosis, fibromialgia, etc.), hacen uso medicinal del cannabis y promueven su autocultivo.

El acercamiento con los y las participantes es a través de la técnica bola de nieve con una informante clave intencional, la coordinadora del grupo a nivel regional, quien vincula a los investigadores con los miembros activos de la agrupación, de la investigación participan padres y madres con distintos roles en la ocupación colectiva, como encargada regional, presidente, secretaria y participantes.

En cuanto a la recolección de datos se utilizó la Observación Participante Abierta, ya que el observador participa activamente, siendo parte del grupo a investigar, y de esta forma “[...] permite obtener el consentimiento expreso de las personas involucradas en la investigación [...]” (Vieytes, 2004, p. 658).

Esta técnica se utiliza inicialmente para la generación de confianza y el acercamiento progresivo al campo de investigación.

Uno de los métodos de producción de datos que se utilizó, corresponde a la Entrevista Individual Semiestructurada; ya que



[...] constituye una narración conversacional creada conjuntamente por el entrevistador y entrevistado, que contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que la definen como objeto de estudio (Vieytes, 2004, p. 661).

Esta técnica se trabaja con los participantes que se denominan “activos” dentro del grupo, ya que se busca entender y desarrollar las prácticas que han desarrollado hasta el día de hoy.

Se realizaron cuatro entrevistas, dos a la presidenta de la agrupación, como informante clave, y dos entrevistas a otros participantes que tienen una participación activa en las actividades de la agrupación; secretaria y participante.

Por otro lado, se generaron 2 Grupos de Discusión, como refiere Vieytes (2004), al estar en un grupo se estimula la conversación entre los miembros, y como plantea Gurdían Fernández (2007) el grupo de discusión favorece que los participantes se involucren en el intercambio de ideas y diálogo. En ambas instancias participan todos los participantes de la investigación.

Todas las entrevistas y grupos de discusión fueron documentadas con consentimiento de los participantes, mediante grabaciones de audio. Los resultados presentados en este documento, se concentran en los hallazgos obtenidos en las entrevistas individuales semiestructurada y en los grupos de discusión.

La información producida se organizó a través de malla categorial, en la cual se definieron temas, categorías relevantes para el estudio: autoproducción, identificación colectiva y visibilización del uso en los niños y niñas. De cada una de ellas se establecieron subcategorías de análisis. Se realizó análisis temático, a través del procedimiento de triangulación inferencial, “[...] que consiste en ir estableciendo conclusiones ascendentes, agrupando las respuestas relevantes por tendencias” (Cisterna, 2005, p. 68). Lo cual, es consistente con el uso de categorías y subcategorías para dar cuenta de los objetivos de la investigación.

Las consideraciones éticas, incluyeron el uso del consentimiento informado, para dar a conocer los objetivos y propósitos de la investigación, estipulando el carácter voluntario de la participación y de la confidencialidad, de la misma. Los resultados de la investigación fueron validados por los participantes del estudio.



Resultados y Discusión

Para esta investigación son fundamentales los discursos que los participantes expresan, relacionados a los elementos que estarían constituyendo una condición de apartheid ocupacional, en el cual se encontraría la ocupación colectiva Mamá Cultiva.

El primero de ellos, corresponde a la legislación como una institución limitante en el ejercicio del derecho a la salud, ya que promueve una visión prohibicionista y negativa del cannabis, como relata una madre

[...] hasta el momento el objetivo más claro es que el cannabis sea visto como medicina, que la saquen... que la bajen de la ley 20.000, que no sea vista como droga, porque nosotros no la vemos así (AB).

Otro elemento presente en los participantes, corresponde a la estigmatización como lo expresa (JB):

[...] el estigma, sí, porque a uno, o sea, yo y mis compañeros nos mostramos siempre porque nosotros no ocultamos lo que estamos haciendo, y mucha gente nos ve como, no se po, casi como los traficantes.

Existe una relación entre legislación y criminalización, que repercute directamente en la calidad de vida de las familias y sus hijos e hijas. Esto se refleja, en la preocupación que genera el hecho de hacer uso medicinal del cannabis con la legislación actual, tal y como lo expresa la entrevistada:

Gabrielito, el niño que partió hoy día, yo le tuve que hacer aceite, [...] me recibieron aceite, los papás fueron súper generosos y resguardaron mi nombre, por qué [...] por cualquier tema legal, la ley dice que yo no puedo compartir, entonces estaba cometiendo tráfico, entonces me resguardaron (AB).

Otra de las estructuras que constituyen el apartheid ocupacional, es el modelo médico hegemónico, a través del sistema de salud de Chile y el saber médico, como ilustra la siguiente cita:

[...] al año después llegas a la misma consulta, con el mismo doctor, ve los mismos exámenes y te dicen hay que ver, [...] todo porque lo sentaste y el güeón está tieso con la mirada fija, le moví la llave, el güeón no pesca ósea porque el entorno es completamente distinto porque al güeón no lo ve desde hace un año que se va a acordar de él, y entonces llega y te dice “¿y responde a algún estímulo?”, “sí”, yo le muevo las llaves y gira la cabeza, y el güeón empieza a mover las llaves y la soff... no le interesa mostrarle lo que está haciendo, no le llama la atención, [...] y no te cree ni una güeá



porque no hizo nada. Entonces va y te dice “ya ya” y recetamos y la gñeá y hay que esperar, y vuelva en un año más, seis meses más a control (AB).

Tal como ilustra la cita, el sistema de salud además de tener una mirada reduccionista acerca de la concepción de los sujetos, ignora completamente los discursos que carecen de rigor científico como lo son la experiencia subjetiva de padres y madres. Es por esto, que sólo ofrece el saber médico como alternativa de salud para los niños y niñas. Los padres y madres son conscientes de que la medicina y sus tratamientos no persiguen como fin la salud de sus hijos, sino, más bien mantenerlos como consumidores de la industria farmacéutica, todo bajo la complicidad de los equipos médicos. Tal como lo señala una de las participantes

Si po, con las sociedades médicas que ellos dicen que no hay, o sea es que nuestra lucha va por ese lado igual, contra las sociedades médicas y también contra las farmacéuticas, en qué sentido, que las farmacéuticas también dentro de esto trabajan con las sociedades médicas y te dicen mira nosotros te podemos traer un medicamento de afuera que te cuesta millones y que no da resultados (AB).

El modelo Médico hegemónico dificulta a los niños y niñas y sus familias ejercer el Derecho a la Salud, e incluso a largo plazo podría colocarlos en riesgo, ya que el exceso de fármacos acaba por provocar un daño biológico en los niños y niñas como sostiene la participante (JB):

[...] o sea, porque no empiezan a funcionar los medicamentos y no es que los vayan cambiando es que van agregando más medicamentos, entonces básicamente es que tienes un niño dormido.

En síntesis, los autores, a partir de la experiencia en la investigación, proponen que el apartheid ocupacional, corresponde al proceso de articulación opresiva, de la dimensión social, legal y del saber/poder dominante, que limita el ejercicio pleno del derecho a la salud, de grupos específicos de la población. Esto, a juicio de los autores, no emerge de manera natural, dado que la capacidad de autocultivo y de autoproducción de la medicina, es una amenaza a intereses de grupos de poder, como lo señala Sepulveda (2017, p. 1)

[...] el cannabis [...] es censurada por la industria farmacéutica y el sistema de salud actual, que no permiten su difusión, porque tiene mucho poder de sanación.

La legislación, el Modelo Médico Hegemónico, y la estigmatización/criminalización, en el uso medicinal de cannabis; son las tres dimensiones que estructuran el apartheid



ocupacional, y su efecto opresor, se materializa cuando se despliegan y articulan las instituciones o dispositivos legales y médicas, con el ámbito simbólico-cultural, en el cual circula el estigma y la criminalización.

En este sentido, desde una perspectiva ocupacional, los autores definen que la ocupación colectiva mamá cultiva, es un dispositivo de resistencia y lucha, promotor de la fuerza necesaria para superar las dimensiones, recién señaladas. A continuación, se profundizará en torno a las formas, en que esta Ocupación Colectiva, se organiza y las prácticas que desarrolla, como alternativa de lucha social, contra hegemónica, para cumplir su propósito de autonomía, libertad y emancipación.

Gestando prácticas transformadoras desde la autoproducción

Frente a esta condición de apartheid ocupacional, la ocupación colectiva emerge como una posibilidad de resistencia y búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a un grupo social determinado, para el caso de la ocupación colectiva Mamá Cultiva, se desarrollan una serie de mecanismos para luchar y alcanzar el derecho a la salud. Uno de ellos es la autoproducción, que incluye la práctica de apropiación de los procesos de salud enfermedad y la producción de saberes.

Las familias resisten primeramente mediante la apropiación de los procesos de salud – enfermedad de sus hijos; esta idea surge a partir de lo que plantea Marín (2012) al referirse a la apropiación social del conocimiento

[...] se entiende como un proceso que implica, por un lado, la disposición de los conocimientos científicos y tecnológicos en un escenario y lenguaje comunes para la sociedad; y por otro, que el ser humano hizo suyos tales conocimientos como elementos útiles y necesarios para su beneficio y provecho (Marín, 2012, p. 57).

Sin embargo, en el caso de los padres y madres la ocupación colectiva Mamá Cultiva a través del conocimiento disponible y la autoformación sobre el cultivo, preparación y administración del aceite de cannabis y su uso medicinal, como señala MF participando “... de como cultivar, cuando ya haces el cortado, como secar el cogollo, como hacer el aceite, como se elaboraba, que era lo que tenía que tener”, no solo hacen suyo los conocimientos asociados a esta práctica, sino que también la práctica misma los transforma en sus propios tratantes y testigos directos de los efectos positivos esperados con el uso de la planta, Esto constituye una práctica de resistencia fundamental para los propósitos de la ocupación colectiva Mamá Cultiva, vinculada a la producción de sus propios saberes, que permean el Modelo médico hegemónico y los



cuerpos que lo constituyen, los médicos, lo que al mismo tiempo produce legitimidad entre los miembros de la Ocupación Colectiva Mamá Cultiva sobre sus propios saberes.

La misma entrevistada refuerza el relato señalando:

[...] durante un año teníamos charlas los viernes íbamos a charlas, donde nos enseñaban... entonces empezamos a juntarnos y a trabajar todos para nosotros mismos, en dudas que teníamos nosotros mismo como porque la planta se puso amarilla a lo mejor le echaste mucho potasio, le echaste mucho abono, mucho fertilizante, no le eché tanto, mide el agua o deja el agua de un día para otro y así uno va aprendiendo cosas (MF).

Este proceso de apropiación posiciona a los padres y madres y sus conocimientos respecto a la planta por sobre el saber médico, como relata JB cuando finalmente la médica tratante cede, dado que la medicina tradicional no da respuesta a la problemática de salud abordada, y comienza a incorporar el uso del cannabis en el tratamiento.

Hablé con la neuróloga porque ella me dijo [...] “con la niña hemos probado todo los remedios, ella tiene una cirugía al cerebro, ¿ya que se puede hacer?” Me decía, “ya no sabemos que más” [...] entonces yo le dije si ella conocía el aceite de cannabis, si había escuchado sobre eso “sí, ¿Por qué?” Me dijo, me quedó mirando como extraña, y yo le dije, “mire, yo a mi hija se lo voy a dar con o sin autorización, se lo voy a dar yo, yo tengo, se lo voy a dar”, y me dijo “Ya” me dijo, “tráigalo” (JB).

La misma entrevistada relata una experiencia en la que se da cuenta que la apropiación de los procesos salud enfermedad y como éstos generan un impacto positivo en el cuerpo médico y disciplinar que permiten una apertura al reconocimiento del uso del cannabis y la autonomía de los padres en esta práctica de sanación de sus hijos

Me acuerdo que llegaron las paramédicos, las enfermeras, todo el mundo a ver, porque me vieron entrar con una jeringa, entonces claro, si todas ellas escucharon que yo le iba a dar aceite, pero claro, me vieron entrar con una jeringa y ellas no entendían si se inyectaba o porque... no conocían en realidad, así que yo ahí, explicándoles “esto se toma así, se pone acá una porción en el dedo y se pone debajo de la lengua”, entonces ahí todas mirando, y “pucha, ¿resultará?”, “Ojalá que sí”, y al segundo día la Liz no tenía convulsiones (JB).

Al mismo tiempo, esta experiencia se transforma en un espacio de educación e intercambio de saberes con los profesionales asociados al campo de la medicina



hegemónica, de tal forma que éste se permea con nuevos saberes y prácticas que se refuerzan con la obtención de los resultados esperados.

La apropiación de los procesos de salud – enfermedad de los padres integrantes de la ocupación colectiva mamá cultiva constituye un aspecto fundamental para el cumplimiento de los propósitos de la Agrupación, así como para el fortalecimiento de esta misma. Una expresión de lo recién descrito es la producción de medicina alternativa, como una práctica de resistencia, según lo planteado por Santos (2010) al referirse a las sociologías de las emergencias, a que no solo permita superar la medicalización de los tratamientos de sus hijos e hijas, sino que permita la posibilidad de que en el futuro próximo se reconozca el uso del cannabis medicinal como un tratamiento legítimo y surgido de las necesidades de los que sufren, de los que demandan y no tienen voz para hacerlo, como los niños y niñas con enfermedades refractarias y sin solución con los tratamientos médicos tradicionales.

Esta apropiación implica dos aspectos fundamentales; primero: el fortalecimiento, en el sentido de que pueden ejercer su poder de decidir, a través de la cooperación con otros, en este caso con los integrantes del Modelo Médico Hegemónico; y segundo: la determinación e intencionalidad de los padres por intervenir, como un acto político, directamente la institucionalidad médica y social. Lo anterior, implica considerar el apoyo que existe como elemento esencial en la Ocupación Colectiva, ya que permite a sus participantes moverse desde el malestar al bienestar psicosocial, basados en relaciones de cooperación, empatía y solidaridad. Y al mismo tiempo les permite construirse como una comunidad política, como ciudadanos, buscando ejercer el derecho a la salud a partir de sus propia voluntad u organización (Guajardo; Galheigo, 2015). Como plantean Fransen et al. (2015) la ocupación colectiva Mama Cultiva desarrolla prácticas que corresponderían a una ciudadanía participativa, es decir, prácticas que incluyen la participación activa, influyen en la toma de decisiones que los involucran directamente, de tal forma que juntos puedan determinar su presente y futuro.

El uso medicinal del cannabis: Visibilizando la lucha

Es importante que algunas prácticas que desarrolla la ocupación colectiva Mamá Cultiva tributen a que la sociedad, los médicos y todos los que puedan, conozcan los beneficios positivos del uso medicinal del cannabis para los niños y niñas.

Uno de ellos se denomina la instrumentalización del saber médico, La instrumentalización hace referencia según Estrada y Espinal (2014) a los mecanismos y efectos que produce el mercado en los cuerpos, en los consumidores, para que estos



consuman sus mercancías y productos, dicho propósito se cumple cuando el mercado usa los medios de comunicación para transmitir los encantos del consumo y el mercado. Entonces el asunto está en lo que se usa, como y para que se usa.

En el caso de la ocupación colectiva Mamá Cultiva, la instrumentalización del saber médico busca respaldar y validar la práctica del uso del cannabis medicinal, y para ello es necesario, avanzar en la superación del Modelo médico hegemónico. Dicho propósito se gesta a partir de la capacidad de los padres de negociar con los médicos sobre los ajustes farmacológicos en el tratamiento de sus hijos, especialmente con la disminución progresiva de los fármacos tradicionales y simultáneamente la instalación del uso del cannabis medicinal en el tratamiento de sus hijos, como lo señala la misma entrevistada:

Empecé a darle cannabis, y al hablar con el doctor le dije “porque no me ayudas a quitarle los medicamentos” y empezamos a quitarle este, estos son más fuertes y empezamos así una semana en la mañana media cantidad, después le das igual, le da en la tarde empezamos a dosificar para poder en 20 días 30 días sacarle todo lo que era la cantidad de medicamentos (MF).

La instrumentalización del saber médico se materializa en que, contando con el apoyo de los médicos, los padres y madres pueden iniciar el autocultivo con el cual prepararan el aceite medicinal de cannabis, como lo menciona la entrevistada:

[...] es que Fundación Daya, a la cual pertenece Mamá Cultiva, nos dio un papel que decía que si un neurólogo a ti te firma el papel acreditando ue ese aceite a tu hijo le hace bien tú puedes cultivar 4 plantas (MF).

Por último, muy vinculado a la anterior, se encuentra el reconocimiento del gremio de la medicina entre sus pares, de lo beneficioso del uso medicinal del cannabis, como se menciona en el grupo de discusión desarrollado durante la investigación

En una oportunidad vino una doctora de Santiago que es de la empresa [...], el doctor se puso a hablar con su colega y le dijo “no el Tomás era súper refractario” [...] Continúo diciendo: “Era súper difícil poder bajarle no se el Propofol, era un Michael Jackson cualquiera, porque estuvo mucho tiempo con coma” pero el mismo le dijo y ahí yo me puse colorada: “Oye pero si esta con una medicina alternativa”, “ah le dijo, ¿Cuál?”. El médico de Tomás contesta: “Esta con aceite de marihuana” y la Doctora así los ojos, él lo reconoció y dijo: “El Tomás ha tenido un cambio impresionante” y eso a mí me sirve me ayuda me levanta como el ánimo y me sirve (GN).

Este reconocimiento implica un efecto que visibiliza la inclusión del cannabis medicinal en los tratamientos de los niños y niñas, dado que el cuerpo médico es permeado por



estas dinámicas de lucha de la ocupación colectiva Mamá Cultiva, promulgando el conocimiento y prácticas de ésta como un saber que beneficia a otros:

[...] la doctora "Pasten" en Santiago, que ella cuando vio y se dio cuenta que podía bajar convulsiones, que había un despertar cognitivo y de que no estaba fuera de este mundo [...] ahora es capaz de decirte por lo menos, mira parte de tal dosis, y te mandan y que hace esa doctora que ya lleva un año y medio instruyéndose en la [...] te manda donde una mamá, habla con esa mamá, ella te puede ayudar más (AB).

Así mismo, el siguiente relato da cuenta del efecto de la convicción y practica del uso medicinal de cannabis, lograr la empatía del cuerpo médico, la cual es resultado de diversas instancias de sensibilización desde la ocupación colectiva mamá cultiva hacia dicho grupo especialista; lo que promueve la integración de éstos, en el entramado de relaciones que se crean a partir de la organización y lucha de los integrantes de Mamá Cultiva, y de cómo se van reproduciendo las prácticas de la agrupación, a través de los mismos médicos:

[...] entonces esos gestos son maravillosos, son ¡lindos!, porque no todos los médicos lo hacen, como te digo, que vengan aquí a la casa a verlo, que venga con su auto, que gaste su combustible y venga a verlo, para mí es fantástico; y que no e quiera cobrar ni un peso, es fabuloso, como le digo él habla del Benjamín, de los cambios, de los niños como él y sabes tú que es súper bueno (MF).

Mamá Cultiva busca instrumentalizar el saber médico, usando la estrategia de sumergirse en las racionalidades argumentativas propias del Modelo Médico Hegemónico, para que, en ese mismo espacio, se valide científicamente el uso del cannabis con propósitos medicinales y emerger con prácticas terapéuticas respaldadas por este saber-poder, es decir, hacer uso del poder social de la medicina, y desde ahí impulsar la posibilidad de instalar, como plantea Rodríguez (1995) la verdad, la verdad que valide el uso medicinal del cannabis, desde aquel poder, la verdad de la ocupación colectiva Mamá Cultiva, como señala Ovejero (2001) será un discurso de la verdad, desde aquellos que ostentan el poder en el campo de la sanación.

Las acciones estratégicas de la ocupación colectiva, son posibles de comprender, a partir de lo planteado por Montero (2006), el ejercicio de práctica social que implica ser parte de esta ocupación colectiva, se materializa en la capacidad del grupo de visibilizar su demanda a nivel social, es decir, de avanzar desde el campo de lo privado, a la exposición pública del malestar psicosocial que los identifica, esta estrategia se entiende



como un acto político que es transversal a todas las prácticas de resistencia que lleva a cabo la Ocupación Colectiva Mamá Cultiva.

Lo relevante es que los integrantes de la ocupación colectiva Mamá Cultiva, significan que estas prácticas en la esfera social, son fundamentales para alcanzar su objetivo desde la visibilización, como lo explica MF al referirse a la importancia de la participación en las marchas que organizan como equipo, junto a otros colectivos y agrupaciones que luchan por el mismo motivo:

Es importante porque la gente tiene que saber, porque hemos ido mi esposo y yo y una sobrina nos acompaña, nos ha acompañado los tatas, [...] vamos con orgullo y con carteles a poder marchar, para poder así que la gente sepa que estamos luchando por nuestros hijos (MF).

Otra estrategia para tomar control de la esfera social, que desarrollan los integrantes de Mamá Cultiva es la difusión cara a cara, boca a boca, visibilizando la situación

[...] quiero que el resto se dé cuenta y yo por lo que más puedo siempre le estoy diciendo a la gente y he visto como que he convencido a mucha gente de buscar la alternativa (JB).

Lo que da cuenta que la lucha no se limita solo al espacio en el cual se reúnen solo aquellos que comparten la necesidad de acceder al cannabis medicinal, sino que la idea es invadir todos los espacios de la vida cotidiana y sumar más personas que apoyen la causa, como lo señala

Pero yo te digo hoy en día, hasta en mi empresa, todo el mundo sabe que el Tomas esta con aceite, y me preguntan oye y sirve para esto, y para esto otro (GN).

Los Medios de Comunicación son un mecanismo tremendamente valorado, que permite transmitir el saber adquirido en la ocupación colectiva y además de ayudar a crear conciencia en la opinión pública y la ciudadanía, para desestigmatizar el uso del cannabis, lo que sustenta:

Si a mí, me invitan a una radio, a un diario o a la tele es porque además yo tengo el conocimiento y me he preparado para poder hablar de eso, por ejemplo cuando estuvimos en el pic de esto, cada entrevista que yo iba era por la ley 20.000 y yo tenía que estudiar mientras manejaba y si me preguntaban esto y esto otro (AB).

La lucha por el derecho a la salud de la ocupación colectiva Mamá Cultiva, se realiza a través de prácticas que están pensadas en instalar la temática a nivel social, para generar concientización y apoyo por parte de la ciudadanía y así resolver su demanda



desde la visibilización pública. En tal sentido, el día 30 de junio del año anterior, se organiza un seminario denominado “Jornada de Cannabis Medicinal, una mirada desde el amor”, con el propósito de dar cuenta de las acciones y desafíos de la agrupación Mamá Cultiva y Fundación Daya por alcanzar sus objetivos. En tal actividad exponen 2 de los autores de este estudio, quienes continúan participando activamente de la Ocupación Colectiva y colaboran con estas iniciativas para difundir el quehacer de ésta.

La identificación colectiva como soporte y como producto de sí mismos

Todas las prácticas mencionadas anteriormente dan cuenta que, en la ocupación colectiva, cuyos propósitos están vinculados a la acción social para alcanzar el derecho a la salud, también se producen dinámicas y organizaciones internas que fortalecen los vínculos, a partir de la necesidad de resolver el problema de salud y hacerse expertos por experiencia en la producción de aceite de cannabis. Esto implica, por ende, que es necesario sumergirse en aquellas dinámicas y razones que significan relevantes para formar parte de esta agrupación, se comprende que el apoyo a nivel relacional, produce cambios en el malestar psicosocial, es decir, promueve movilizar a los sujetos desde una condición de desagrado, incomodidad e inseguridad a un estado de bienestar psicosocial.

Esta es una experiencia compartida que genera en las participantes un sentir colectivo, es decir, como señala Caro-Vines, Morrison y Palacios (2015, p. 148) un sentimiento de “la existencia de un sistema de símbolos compartidos; la experiencia de seguridad emocional; y el sentimiento de identificación”, en torno a las experiencias compartidas de salud que han vivido sus hijas e hijos, así lo expresa un participante cuando se dialoga en torno al grupo y sus propias experiencias, como lo relata (JB)

[...] metida en internet me salió el nombre de Mamá Cultiva y me llamó la atención porque vi publicaciones de mamás que estaban en la misma lucha mía, buscando una alternativa para sus niños (JB).

Lo anterior se refuerza con el relato de otra entrevistada y participante de la agrupación:

[...] la P. va a las charlas cuenta la experiencia de su hija y todo y es súper válido y en el fondo eso es lo que le queda a la gente, le queda la experiencia real y además que en ese tipo de niños la experiencia es parecida, es la tuya muy igual a la mía [...] Todos hemos pasado por el mismo proceso entonces queda mucho más internalizado (AB).

Y por último, esta experiencia se materializa en el sentido de identidad que genera para los integrantes de Mamá Cultiva, el hecho de formar parte de este grupo



Si, si, si hay reuniones yo voy... eh... yo siempre les digo a las chiquillas, yo orgullosamente soy Mamá Cultiva, me siento orgullosa de verdad e estar en esta agrupación (JB).

El apoyo mutuo, entendido como la práctica orientada por la cooperación, la solidaridad, dentro de una comunidad o grupo social (Robertazzi; Pertierra; Ferrari, 2008), al interior de la Ocupación Colectiva fortalece y aumenta la cohesión del grupo, propiciando la pertenencia al mismo. Particularmente en la Mamá Cultiva este apoyo se expresa mediante el intercambio de insumos y experiencias, como lo relata MF

[...] entonces uno hace eso se intercambia y tiene con quien contar o si tiene duda poder preguntar, entonces el grupo para mi es eso, es una red de apoyo [...] (MF).

El apoyo mutuo es un factor gravitante para articular distintos momentos de la lucha por el derecho a la salud de sus hijos e hijas, dado que según Robertazzi, Pertierra y Ferrari (2008, p. 238)

[...] la solidaridad va desplegándose desde la espontaneidad y la coyuntura hasta llegar a convertirse en un compromiso permanente y, finalmente, en una acción estratégica y articulada.

La gran mayoría de las prácticas de Mamá Cultiva se orientan hacia la expresión y exposición de cómo el cannabis medicinal les ha permitido alcanzar un bienestar psicosocial, es decir, sentirse bien al estar en relación con su entorno social y cultural inmediato (Adaro; Muñoz, 2014). Esto implica alcanzar el propósito de ejercer el derecho a la salud, que sus hijos tengan las facilidades y el reconocimiento de acceder y usar el cannabis para sus tratamientos.

Conclusion

La Ocupación Colectiva Mamá Cultiva, valora la adquisición de sus conocimientos, a partir de la experiencia compartida, lo cual a su vez usa para instrumentalizar el saber médico buscando alcanzar sus objetivos, entre estas prácticas se encuentran: la adquisición de certificados médicos que les permiten cultivar cannabis para uso medicinal y reducción de dosis de medicamentos con ayuda de médicos.

Es posible señalar entonces que la ocupación colectiva Mamá Cultiva, al dialogar con el saber médico, lograría avanzar en la superación del Modelo médico hegemónico, a partir de lo que plantean Kronenberg, Pollard y Ramugondo (2010), a través de la evidencia basada en la práctica, propia del saber de los expertos por experiencias.



El trabajo que se realiza en este campo de relaciones, médicos – ocupación colectiva, permite generar cambios que facilitan el acceso a una salud alternativa para sus hijos, esta práctica se refuerza, en tanto simultáneamente, promueve la capacidad de empatizar del cuerpo médico con el malestar psicosocial de los integrantes de la agrupación. Este escenario es una forma de ejercer el derecho a la salud, no de la forma normativa jurídica, guiada por reglamentos por cumplir, sino como lo plantean Cantero et al. (2015) al referirse al ejercicio de los DDHH, como un efecto de prácticas sociales, esas prácticas son las relaciones sociales mismas, y esas prácticas son transformadoras, ya que implica la apropiación de la experiencia social.

Las ocupaciones colectivas implicarían necesariamente, de acuerdo a la experiencia de la Agrupación Mamá Cultiva y probablemente otras organizaciones sociales, politizar las prácticas colectivas, ya que, a través de este ejercicio, se fortalecería la capacidad y el poder de las personas y los grupos de construir un destino con autonomía, autodeterminación, así como luchar por el ejercicio de sus derechos (Montero, 2006) como el derecho a la salud.

La ocupación colectiva Mamá Cultiva genera visibilización de los resultados positivos, movilizaciones, uso de los medios de comunicación, la educación y la autoformación y formación de otros, estrategias que por un lado, intervienen indirectamente los aspectos legales asociados al bloqueo del uso medicinal y criminalización del cannabis, y apuntan especialmente a la desestigmatización, ya que estas acciones como señalan Delgado (2015) apuntan a las 3 componentes necesarios para cambios de actitud positiva, los componentes cognitivos, afectivos y conductuales.

Se espera que esta investigación permita profundizar los conocimientos sobre las ocupaciones colectivas y al mismo tiempo comprender a éstas desde una perspectiva eminentemente social y transformadora, lo cual puede abrir horizontes e ideas en cuanto a las prácticas disciplinares en los contextos de grupos, colectivos y comunidades.

De lo anterior, emerge una propuesta para comprender el concepto de Ocupación colectiva considerando tres importantes connotaciones, primero; ser un espacio dinámico, cambiante, transformable en sí mismo, para los sujetos y las relaciones que la constituyen, segundo; ser una entidad, un organismo social que permita identificar los distintos poderes que componen las redes de poder en las cuales está inserta, lo que Agamben (2011, p. 250) denomina dispositivo, dado que la ocupación colectiva al igual que el dispositivo “resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber”, y tercero: la ocupación colectiva es una posibilidad de articulación colectiva, comunitaria,



colaborativa, política que permite transformar condiciones sociales desfavorables, condiciones de opresión, de vulneración, superar el apartheid ocupacional, con acciones concretas y objetivas en el campo de la vida cotidiana.

Por último, es fundamental dar cuenta que el tema analizado en este estudio se encuentra en plena discusión como país, y que, en ese sentido, se han alcanzado avances que de alguna manera están vinculados a las prácticas desarrolladas por la ocupación colectiva Mamá Cultiva y otras organizaciones. Estos avances se materializan en marzo del año 2018, cuando se aprobó la regulación de uso medicinal de productos derivados de cannabis, que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis (Camara..., 2018).

Notas

¹ Este trabajo corresponde a un material desarrollado a partir de una investigación. Este trabajo consideró y desarrolló todos los aspectos éticos vigentes.

Referencias

Adaro, B.; Muñoz, J. El bienestar psicosocial desde la perspectiva de niños y niñas que viven en contextos de vulnerabilidad social. 2014. [s.p.] Tesis (Carrera de Terapia Ocupacional) – Universidad Andrés Bello, Chile, 2014.

Agamben, G. ¿Qué es un dispositivo? Sociológica, México, v. 26, n.73, p. 249-264, 2011.

Biblioteca Del Congreso Nacional De Chile. Ley n° 20.000, 16 de febrero de 2005. Sustituye la ley no 19.366, que sanciona el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Diario Oficial de la República de Chile, Poder Ejecutivo, Santiago, 16 feb. 2005.

Camara De Diputados. Legislatura 366a, Sesión 6a, de 4 de abril de 2018. Análisis de Licitación de Transporte Público Urbano en Área Metropolitana de Santiago. Diario de Sesiones del Senado, Chile, 4 abr. 2018

Cantero, P. et al. Terapia Ocupacional y Exclusión Social: Hacia una praxis basada en los derechos humanos. España: Editorial Segismundo, 2015.

Caro-Vines, P.; Morrison, R.; Palacios, M. (Ed.). 50 años de Terapia Ocupacional en Chile: prácticas, epistemologías y realidades locales. Chile: Ediciones On Demand, 2015.

Cisterna, F. Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. Theoria, Chile, v. 14, n.1, p. 61-71, 2005.



Cohen, J. L. et al. Teoría de los movimientos sociales. Cuadernos de Ciencias Sociales, Costa Rica, v. 17, n. 3, p. 3-42, 1988.

Delgado, A. Estrategias psicosociales para el cambio de actitud hacia personas discriminadas por su discapacidad o trastorno mental. Revista Española de Discapacidad, Madrid, v. 3, n. 2, p. 27-39, 2015.

Estrada, D.; Espinal, C. El cuerpo: entre la negación, la utopía y la instrumentalización. Curare, Colombia, v. 1, n.1, p. 61-69, 2014.

Figueroa García-Huidobro, R. El derecho a la salud. Estudios constitucionales, Santiago, v. 11, n. 2, p. 283-332, 2013.

Fransen, H. et al. Participatory citizenship: Critical perspectives on client-centred occupational therapy. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Oslo, v. 22, n. 4, p. 260-266, 2015. <http://dx.doi.org/10.3109/11038128.2015.1020338>.

García-Robles, J. Historia del Cannabis en México: Yerba Maldita. 2015. Disponible en: <https://bit.ly/3s2OUww>. Acceso en: 20 may 2016.

Guajardo, A.; Galheigo, S. Reflexiones crítica sobre los derechos humanos: contribuciones de la Terapia ocupacional latinoamericana. Boletín de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, Argentina, v. 71, n. 2, p. 73-81, 2015.

Gurdián-Fernández, A. El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa. San Jose: Investigación y Desarrollo Educativo Regional, 2007.

Kronenberg, F.; Pollard, N.; Ramugondo, E. Introduction: courage to dance politics. In: Kronenberg,

F.; Pollard, N.; Sakellariou, D. Occupational Therapies without Borders. Churchill Livingstone: Reino Unido, 2010. p. 1-16.

Kronenberg, F.; Simó, S.; Pollard, N. Terapia Ocupacional Sin Fronteras: Aprendiendo del espíritu de supervivientes. Buenos Aires: Médica Panamericana, 2007.

La Sáenz Rovner, E. "Prehistoria" de la marihuana en Colombia: consumo y cultivos entre los años 30 y 60. Cuadernos de Economía, Colombia, v. 26, n. 47, p. 205-220, 2007.

Marín, S. Apropiación social del conocimiento: una nueva dimensión de los archivos. Revista Interamericana de Bibliotecología, Colombia, v. 35, n. 1, p. 55-62, 2012.

Menéndez, E. Modelo médico hegemónico y atención primaria. Buenos Aires: Segundas Jornadas de Atención Primaria de la Salud, 1988. p. 451-464.

Montero, M. Teoría y práctica de la psicología comunitaria: la tensión entre comunidad y sociedad. Buenos Aires: Paidós, 2006.



- Ovejero, A. La dialéctica saber/poder en Michel Foucault un instrumento de reflexión crítica sobre la escuela. *Aula Abierta, España*, v. 30, n. 77, p. 99-110, 2001.
- Palacios, M. Sentido de Comunidad y Ocupaciones Colectivas. En: *Colegio De Terapeutas Ocupacionales De Chile. et al. 50 años de Terapia Ocupacional en Chile: prácticas, epistemologías y realidades locales*. Chile: Ediciones on Demand, 2013. p. 143-160.
- Palacios, M. *Acerca de Sentido de Comunidad, Ocupaciones Colectivas y Bienestar/Malestar Psicosocial. Con jóvenes transgresores de territorios Populares*. 2017. 335 f. Tesis (Doctoral Salud Bienestar y Calidad de Vida) – Universidad de VIC, España, 2017.
- Ramos, J.; Fernández, J. Uso de los Cannabinoides a través de la Historia. *Revista de Socidrogalcohol, Barcelona*, v. 12, n. 2, p. 19-30, 2000.
- Ramugondo, E.; Kronenberg, F. Explaining Collective Occupations from a Human Relations Perspective: Bridging the Individual-Collective Dichotomy. *Journal of Occupational Science, London*, v. 22, n. 1, p. 3-16, 2015.
- Robertazzi, M.; Pertierra, L.; Ferrari, L. La práctica del “apoyo mutuo” en situaciones límites entre trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas. *Anuario de investigaciones, Argentina*, v. 15, p. 235-244, 2008.
- Rodriguez, G.; GIL, J.; García, E. *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Malaga: Ed. Aljibe, 1996. Disponible en: <<https://bit.ly/3baECEy>>. Acceso en: 27 may 2018.
- Rodriguez, T. Poder y Saber (La Micropolítica Foucaultiana y la Práctica Escolar). *Teoría de la educación, Salamanca*, n. 7, p. 163-181, 1995.
- Sánchez, S. La discusión de drogas en Chile. *Revista Chilena de Salud Pública, Chile*, v. 16, n. 3, p. 210-211, 2012.
- Santos, B. *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)*. Argentina: CLACSO, 2006.
- Santos, B. *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Uruguay: Ediciones TRICEL, 2010.
- Sepúlveda, S. La razón por la que la industria farmacéutica prohíbe la cannabis. Chile: *El ciudadano*, 2017. Disponible en: <<http://www.elciudadano.cl>>. Acceso en: 27 may 2018.
- Simaan, J. Olive growing in Palestine: A decolonial ethnographic study of collective daily-forms-of-resistance. *Journal of Occupational Science, London*, v. 24, n. 4, p. 510-523, 2017.



Vargas, M.; Olivares, D.; Fernández, R. Autoetnografía: el teatro como herramienta terapéutica para niños y niñas de una Escuela Hospitalaria. *Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar*, São Carlos, v. 24, n. 3, p. 639-650, 2016.

Vieytes, R. *Metodología de la investigación en organizaciones de mercado y sociedad*. Argentina: Editorial de las Ciencias, 2004.



La profanación como traición en la configuración de las subjetividades en la condición neoliberal

Jorge Eliécer Martínez Posada¹
Gina Marcela Reyes Sánchez²

Resumen

La idea es presentar cómo resistir lo sagrado, que en la actualidad son las formas bien construidas del consumo, es invertir el uso de lo común, es una forma de traición a la norma bien construida del capitalismo, explícitamente del Fondo Monetario Internacional, lo que implica fugas a las estratificaciones del neoliberalismo permitiendo nuevas formas de vida.

En las Formas elementales de la vida religiosa, Durkheim (2007) establece lo profano y lo sagrado como una forma de clasificación a través de la cual, se aborda la relación entre el mundo, el hombre y la religión. Lo profano es aquello que se presenta ante nuestra percepción empírica y es susceptible de ser explicado. Mientras lo sagrado es todo aquello que se impone al hombre o que le es prohibido y, sobre todo, es aquello que escapa a su control. Lo sagrado y su naturaleza, se expresan a través de diversos símbolos y representaciones que en conjunto constituyen “creencias”, las cuales son necesarias en tanto que, hacen posible el acercamiento a lo invisible constituyéndose en un punto medio de la tipología profano-sagrado.

Palabras clave

Profanación; Subjetividades; Condición neo liberal; Religión.

Para Callois (2013, pág. 12), lo sagrado aparece como una categoría de la sensibilidad sobre la cual descansa toda actitud religiosa, por tanto, toda concepción religiosa implica una distinción entre lo sagrado y lo profano, y se encarga de administrarla.

No hay nada que no pueda convertirse en sagrado, y si lo hace toma entre la comunidad un halo de prestigio. Los elementos sagrados suscitan sentimientos de temor y veneración, se presentan como prohibidos. El creyente espera de lo sagrado todo socorro y todo éxito, pero el respeto que el creyente muestra es una mezcla de terror y de confianza, por considerarlo terrible, lo sagrado impone la prudencia; por considerarlo deseable, lo sagrado invita a la audacia (Caillois, 2013, pág. 12).

La religión en tanto administradora de lo sagrado, “sustrae cosas, lugares, animales o personas del uso común y lo transfiere a una esfera separada. No solo no hay religión



sin separación, sino que toda separación contiene y conserva en sí un núcleo auténticamente religioso. El dispositivo que realiza y regula la separación es el sacrificio: a través de una serie de rituales minuciosos, según la variedad de las culturas”, por tanto, es a través de la religión, que se mantiene la separación entre los seres humanos y los dioses (Agamben, 2017, pág. 98).

La creación de un cosmos sagrado es la función de la religión y como creación social, el cosmos sagrado trasciende al hombre al mismo tiempo que lo incluye (Berger, 1970, pág. 41). Se ve entonces que el cosmos sagrado es un nomos ordenador que intenta dotar al universo entero de significación, pero su tarea es totalizante y abarca el resto de mundos humanos. Sin embargo, el orden social no es imbatible y debe ser permanentemente custodiado; para fortalecerlo se da el proceso de legitimación, al respecto Agamben, permitiéndonos una reflexión sobre la religión, establece elementos para distinguir la religión natural de la religión positiva: “Mientras que la religión natural concierne a la relación inmediata y general de la razón humana con lo divino, la religión “positiva” o histórica comprende el conjunto de creencias, de reglas y ritos que se encuentran impuestos desde el exterior sobre los individuos en una sociedad dada en un momento dado de su historia.

“Una religión positiva”, escribe Hegel en un pasaje citado por Hyppolite, “implica sentimientos que son más o menos impresos por coacción en las almas; acciones que son el efecto de un mandamiento y el resultado de una obediencia y son efectuados sin interés directo (Agamben, 2016, pág. 10).

La religión ha servido como dispositivo, como “máquinas para hacer ver y para hacer hablar” (Deleuze, 1990, pág. 155). Es de esta forma que “la religión legitima las instituciones sociales otorgándoles una jerarquía ontológica supremamente válida, esto es, ubicándolas en un marco de referencia sagrado y cósmico” (Berger, 1970, pág. 49).

En un trabajo de acercamiento al origen del concepto “Dispositivo”, Agamben ubica su origen en el término positividad, el cual a su vez está sustentado en la diferenciación entre religión natural y religión positiva. En la primera, la razón humana y lo divino mantienen una relación directa, mientras que en la religión positiva se han impuesto, de forma externa, a los individuos una serie de creencias, reglas y ritos, en el marco de una determinada sociedad y un determinado momento histórico. Surge así el uso del término positividad para denotar el elemento histórico que, a partir de reglas, ritos e instituciones, un poder externo le impone a los individuos (Agamben, 2016, pág. 10).



El término dispositivo deriva del latín *dispositio*, el cual a su vez remite a la idea de organización, arreglo o disposición. Esta organización tiene su origen en la concepción teológica de la oikonomía formulada por los padres de la Iglesia al discutir sobre las figuras de la trinidad y sus funciones. Éstos, en un propósito de defenderse de las acusaciones de paganismo, argumentan que “Dios, en cuanto a su ser y a su sustancia en verdad es uno; pero en cuanto a su oikonomía, es decir, a la manera en que él organiza su casa, su vida y al mundo que él creó, él es trino. Como todo buen padre puede confiar a su hijo la responsabilidad de ciertas funciones y de ciertas tareas, sin por ello perder su poder ni su unidad, Dios confía a Cristo ‘la economía’, la administración y el gobierno de los hombres. Entonces, el término oikonomía se especializará para significar en particular la encarnación del Hijo, así como la economía de la redención (Agamben, 2016, pág. 16).

Lo importante de este hecho es que la oikonomía, en tanto dispositivo de organización, funciona al hacer en Dios una notoria división del ser y de la acción. Es en este sentido que el término dispositivo “ nombra a aquello en lo cual y a través de lo cual se realiza una actividad pura de gobierno sin ningún fundamento en el ser” (Agamben, 2016, pág. 18) razón por la cual, los dispositivos en general implican siempre un proceso de subjetivación, pues deben producir su sujeto.

La religión, en tanto dispositivo, hace posible forjar relaciones de significación entre las creaciones humanas, como por ejemplo las instituciones y los roles: con la realidad cósmica o sagrada, lo cual permite alcanzar un mayor grado de legitimación aminorando las posibilidades de ser cuestionadas. Sin embargo, esto sólo puede procurarse en la medida en que los procesos sociales y la base social que la erigieron como un nomos ordenador se mantengan vigentes, no en el sentido de ser los mismos sino en el sentido de mutar, pero sin desaparecer.

El capitalismo como religión: Administrador de lo sagrado

El capitalismo como religión es un texto inacabado, con notas de trabajo en las que Walter Benjamin reorganizaba los ejercicios de exploración sobre aspectos del fenómeno en estudio (Boito, 2015, pág. 4). Sin embargo, advierte acerca de tres rasgos de la estructura del capitalismo que lo sitúan como religión (dispositivo sagrado):

Primero, el capitalismo es una pura religión de culto, quizás la más extrema que haya existido jamás. En el capitalismo todo tiene significado sólo en relación inmediata con el culto. No conoce ninguna dogmática especial, ninguna teología. Desde este punto de vista, el utilitarismo gana su coloración religiosa. A esa concreción del culto se vincula



un segundo rasgo del capitalismo: la duración permanente del culto. El capitalismo es celebración de un culto sans trêve et sans merci (sin tregua ni piedad). En él no hay señalado un día a la semana, ningún día que no sea día festivo (en el sentido terrible del desarrollo de toda la pompa sacral) que constituiría el esfuerzo más manifiesto de quien adora. Este culto es, en tercer lugar, culpabilizante. (Benjamin, 1921).

El capitalismo como religión, implica la subjetivación al mercado improfanable que bloquea, desvía, captura y neutraliza cualquier intención de poder profanatorio. Agamben (2017) plantea que la profanación es una neutralización de aquello que profana. Una forma de hacer patente estas capturas del capitalismo se dan en las prácticas y discursos de líderes del Fondo Monetario Internacional (FMI), institución creada en 1944 cuando "...se reunieron en Bretton Woods 44 países que firmaron el acuerdo que creó el Fondo Monetario Internacional". "La primera reunión del Directorio Ejecutivo tuvo lugar en la sede del Fondo en Washington D.C el 6 de mayo de 1946 y el Fondo dio comienzo a sus operaciones financieras el 1 de marzo de 1947" (Fondo, 2019). El FMI tuvo como motivos originarios el propender por el equilibrio externo e interno de los países miembros, y asegurar el comercio mundial libre.

El Fondo Monetario Internacional promueve la ampliación del mercado mundial, la estandarización del sistema cambiario y el control del crecimiento económico de los países "El compromiso del FMI con el fundamentalismo del mercado –la convicción de que la solución a todos los problemas radica en abrir las fuerzas de la oferta y la demanda" (La Nación, 2002). De esta manera, tenemos que los funcionarios de la institución asumen este evangelio, como buena nueva o buena noticia, hasta el punto de que el exdirector gerente del FMI solía describir su trabajo como el de "un misionero en jefe para vender el evangelio del ajuste estructural". Comentaristas económicos, entre ellos Stiglitz antiguo director del Banco Mundial, afirman que las medidas y políticas son tomadas por el Fondo Monetario Internacional "basándose en una extraña mezcla de ideología y mala economía, un dogma que apenas esconde intereses creados" (La Nación, 2002). Esta es una apreciación reiterada donde se percibe al FMI como una institución donde "se preocuparon por mantener en pie los principios dogmáticos del capitalismo, cosa que, por otro lado, es su función". Elementos que van generando la condición neoliberal en las que estamos inmersos.

Hacer el análisis del capitalismo como religión, es para este breve trabajo, aproximarnos a uno de sus dispositivos; a una institución económica, específicamente al FMI, en tanto manifestación positiva de la religión capitalista. Esto implica mirar la realidad de esta



institución como un texto simbólico, es decir, como el conjunto de códigos que constituyen esa realidad en el día a día, en tanto acciones significativas que exhiben un significado a través de una terminología religiosa.

El Fondo Monetario Internacional como dispositivo de la religión capitalista

Queremos mostrar cómo el lenguaje religioso se expresa en las formas de la crítica ante la intervención del FMI en la economía de un país, por supuesto tomando en cuenta aquellos relatos en donde el Fondo Monetario Internacional es tratado como una institución religiosa. Luego miraremos cómo la figura de uno de los líderes del FMI es interpretada por la crítica como un representante de la iglesia.

El FMI ante las crisis económicas de los países ha tomado diferentes medidas que, según lo muestra la institución, están orientadas a limitar los riesgos que puedan traer tanto para el país en cuestión como para la economía en general. En casos como el de Ecuador o Argentina, el FMI intervino directamente sugiriendo la dolarización de la moneda, para el caso ecuatoriano, o ampliando la deuda externa para poder seguirla pagando. La reacción de la crítica a estas intervenciones puede constatarse en las siguientes citas:

Aludiendo a la actuación del FMI. "Envían "misiones" de economistas que no conocen la macroeconomía del país que visitan, dado que no hace falta." Segmentariedades "ciudadano-productor-consumidor" que ejerce un conjunto de relaciones de fuerza establecidas y determinadas por tal segmentación en las que daría la impresión de que lleva a cabo acciones políticas, cuando lo que realmente ocurre es que su potencia de acción, su libertad en sentido estricto está canalizada para el mantenimiento del tejido molar: el plan de superficie inmanente.

Otra mirada de la crítica ante las acciones del FMI plantea que "En nuestras tierras, por el contrario, la llegada de una misión del FMI provoca la misma sensación que antaño provocara la visita de una delegación del tribunal de la Santa Inquisición". Si tenemos en cuenta que la inquisición fue un mecanismo utilizado por la iglesia católica, tanto para castigar a los herejes como para controlar la difusión de nuevas ideas, concluimos que este es un puente metonímico que nos lleva a ultimar que la presencia de los funcionarios del FMI es destinada a eliminar o someter toda idea o alternativa que escape al plan económico que ellos han dispuesto, que se enajene y contemple modelos diferentes de desarrollo. Se configura un mito, se elimina la posibilidad de la profanación.

Algunas otras actuaciones del FMI no han sido sometidas a crítica y sus políticas son recibidas como incuestionables, como algo dado que no se pone en duda, como lo



sagrado. “Los acuerdos con el FMI, como los dogmas religiosos, son sagrados e intocables. Están blindados, según dijo un ministro hace poco. No se pueden rever. Un pedido de revisión tendría carácter de ofensa y nos arriesgaría a la excomunión”. Aquí el uso de términos como sagrado o dogma son usados como estratificaciones binarias de segmentación que están en oposición a lo profano o a lo hipotético y que ejemplifican el carácter infranqueable que quiere mostrar en su actuación el FMI.

El mismo comentarista recurre a una narrativa en la que expone cómo para algunas personas es importante “*lograr la bendición de los tecnócratas del organismo financiero*”. Sin embargo, esto no se trata de una metáfora, es una imagen del pensamiento, un funcionamiento, todo un aparato que se planta en el pensamiento para obligarlo a ir por el buen camino y a producir las famosas ideas “justas” del capitalismo.

Desde los dirigentes de esta institución existe también una connotación religiosa del discurso para sustentar sus intervenciones, así Michel Camdessus el 23 de septiembre de 1999, declaró en Washington que los países pobres agobiados por el peso de la deuda externa no deben esperar que la solución a sus problemas “caiga del cielo”. “Este no es tiempo de relajar la disciplina ni de esperar que las cosas caigan del cielo. Y lo digo porque en el Vaticano tienen las llaves del cielo, ¿no?” (La Jornada, México, 2000).

Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento -Homo economicus- empresario de sí. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación (...) acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado” (Han, 2017, pág. 10).

Michel Camdessus, dirigió el Fondo Monetario Internacional y posteriormente pasó a ser asesor del Papa, por 13 años promovió los planes de ajuste estructural de las economías no industrializadas desde el máximo puesto del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue nombrado por el Papa Juan Pablo II consultor del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, organismo que encabeza los esfuerzos del Vaticano para reducir o perdonar la deuda de los países en desarrollo, la mayoría de ellos usuarios de préstamos que otorgó el propio FMI. Camdessus, es, por su afinidad con la iglesia católica, catalogado como “*el sacerdote supremo del mercado y la apertura económica*” (La Jornada, México, 2000).

Con la vinculación de Camdessus al Vaticano hay una conjugación de los tres aspectos: lugar, tiempo y acción: “Hasta fecha reciente, uno no habría mencionado a Camdessus



y al Papa en la misma oración', dijo Seth Amgott, vocero del grupo de caridad Oxfam International, de Washington. Sin embargo, durante sus últimos meses en el fondo, Camdessus comenzó a hablar el mismo lenguaje del Papa en torno a la disminución de la deuda, agregó Amgott (La Jornada, México, 2000). Desde una perspectiva durkhemiana, se hace clara la asociación entre Camdessus y lo sagrado, la actuación es asumida como una manifestación divina en la que su participación en la iglesia obedece a designios no humanos "el portavoz de Oxfam señaló que era una pena que Camdessus no se hubiera convencido completamente de la necesidad de un rápido alivio de la carga de la deuda mientras todavía estaba en el FMI. Pero nadie pregunta por qué Pablo no se convirtió antes de recorrer el camino a Damasco, simplemente nos complace que lo haya hecho, dijo" (La Jornada, México, 2000).

Allí el déspota dice: ¡Nunca traiciones!, no te salgas del régimen de signos ni de la moral del marketing y los hombres buenos, exitosos, felices, inteligentes, capitalizados; pues ellos son la especie, la esencia universal deseable y fija, en la insistencia de constituir una única subjetividad: el homo economicus y empresario de sí mismo (Foucault, 2007).

Cuando esto sucede, tal comprensión del "poder", captura toda posibilidad diversa de la potencia de la línea de fuga. La segmentariedad dura del Estado-Nación se sostiene al precio de la sobrecodificación binaria, caracterizada por su tendencia universalizante y totalizante. Deleuze y Guattari (2006) insolentes dicen: da igual besar la corona del rey que el ano del chivo; de eso se trata, el rostro de una trampa que cierra el círculo de un régimen de significantes, un dispositivo de captura y reterritorialización que dispone el medio ambiente para la libertad de sujetos endeudados y poblaciones reguladas en un funcionalismo estratificado de órganos.

La espiritualidad como actitud en el pensar

En esta ponencia, asumimos la espiritualidad como una actitud en el pensar, es el mismo pensamiento que experimenta problematiza, eventualiza y ficcionaliza eso que denominamos 'realidad', una realidad construida en el marco del capitalismo, o lo que Lazzarato llama "Condición neoliberal" (Lazzarato, 2013). Espiritualidad será jugar un juego profano que desarticula todo y cuanto se acepta como tal, escucha los silencios que le llaman a la traición, a abandonar las propias filas e ir hacia lo desconocido. La espiritualidad rompe la sagrada 'realidad' y jugando con la doble articulación, escinde el mito (los discursos de saber) -en un ludus perverso que conserva el rito-, y el rito (las prácticas y relaciones de poder) -en un jocus o juego de palabras que cancela el rito- (Agamben, Profanaciones, 2017). Allí la espiritualidad produce un sentido: retomar de



raíz (o raicillas) la manera en que los hombres problematizan su comportamiento en una actitud experimental de flujo y poesía, de actitud rebelde que sigue, pero no imita:

encontrar la línea de separación, seguirla o crearla, hasta la traición (...) salir del agujero negro de la subjetividad, de la conciencia y de la memoria, de la pareja y de la conyugalidad (...) Lo importante es salir de él, no en arte, es decir, en espíritu, sino en vida, en vida real. No me privéis de la fuerza de amar (Gilles & Guattari, 2006, pág. 191).

Traición a la tradición, profanación a lo divino, salirse de la propia fila e ir hacia lo desconocido empujando cada vez más el límite. Traición de amor que no cae en la trampa de la reterritorialización o la muerte.

Espiritualidad es profanar lo que era indisponible y separado; restituir al uso; desactivar los dispositivos del poder y restituir al uso común los espacios que el poder había confiscado (Agamben, Profanaciones, 2017). Profanar no es la transformación de un modelo sagrado, intentando encajar lo grande en lo pequeño en una suerte de empresa deductiva, sino es la destrucción de las seudofomas expresivas de un eterno retorno al dispositivo sagrado.

La espiritualidad como traición y profanación no es la simple abolición o anulación de un dispositivo, sino la potencia de hacer un nuevo uso de ellos. Espiritualidad es la potencia que permite volver a hacer experiencias, a no convertirse y vivir en museo y en la permanente imposibilidad de uso. Espiritualidad es reconocer que “Los comportamientos y las formas del vivir humano no son prescritos en ningún caso por una vocación biológica específica ni impuestos por una u otra necesidad; sino que (...) conservan el carácter de posibilidad” (Agamben, 2001, pág. 14), es una espiritualidad inesencial.

El afecto traiciona la racionalización: aquí ya nada es medible ni cuantificable: es inefable haecceidad, genius, magia, la muchacha indecible, cuerpo sin órganos, devenir-animal, poder de afectar y de ser afectado. El afecto “es proceso de apropiación existencial a través de la creación continua de duraciones de ser heterogéneas y, en este aspecto, sería mejor renunciar a tratarlo bajo la égida de los paradigmas científicos para tornarnos deliberadamente hacia paradigmas éticos-estéticos” (Guattari, 2000, pág. 230) y espirituales.

Por último, la espiritualidad hoy se vislumbra como una forma de resistencia o línea de fuga que permite conjugar por fuera de las religiones, aquellos intereses colectivos que superan la perspectiva individualista, sin caer necesariamente en un ámbito



sobrenaturalista o vinculado a la trascendencia; bajo esta forma de pensar, la espiritualidad contempla múltiples vías de acción para potenciar la vida. Si bien las religiones en muchos sentidos jugaron este papel, involucrándose en la forma en que se ordenaron las sociedades y condicionando el ordenamiento de lo sagrado, hoy sus mecanismos no resultan suficientes para vincular a ellas todas las inquietudes y necesidades de estos tiempos. En sí misma, esta situación plantea que las acciones espirituales son políticas en tanto aspiran a ser transformadoras, y, por otro lado, formulan un claro reto a la tradicional forma de organización de las religiones, las cuales deben intervenir cada vez más en la lucha por sociedades más justas si no quieren perder más terreno en la esfera de la vida social.

Notas

¹ Posdoctor en Filosofía, Universidad de Cádiz, Estudios Postdoctorado en Ciencias Sociales CINDE-CLACSO. Doctor en Filosofía programa Historia de la Subjetividad. U. Barcelona Doctor en Ciencias Sociales. Niñez y Juventud. CINDE-UM, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Filosofía, U. Barcelona. Magíster en Desarrollo Educativo y Social CINDE-UPN, Licenciado en Filosofía USB. Miembro del grupo Intersubjetividad en Educación Superior y del Grupo internacional CLACSO: Subjetivaciones, ciudadanías críticas y transformaciones sociales, Catedrático de la universidad Javeriana en la Maestría en educación y en el Doctorado en Ciencias sociales y humanas. Miembro de la red internacional de investigadores en subjetividades políticas. Director de la línea de socialización y subjetividades políticas CINDE-UPN. Profesor titular de la Universidad de La Salle, jmartinezp2@gmail.com

² Socióloga, Magíster en Sociología, Universidad Nacional de Colombia. Candidata al Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, Universidad Nacional de Córdoba Argentina. Docente-investigadora, Departamento de Formación Lasallista, Universidad de La Salle. Bogotá. Colombia. Miembro del grupo de investigación, Intersubjetividad en Educación Superior, gmreyes@unisalle.edu.co

Bibliografía

- Agamben, G. (2016). *¿Qué es un dispositivo?* México: Adriana Hidalgo editora.
- Agamben, G. (2017). *Profanaciones*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Benjamin, W. (1921). *El capitalismo como religión*. Obtenido de Biopolítica de los estados de excepción: http://biopoliticayestadosdeexcepcion.blogspot.com/2010/12/el-capitalismo-como-religion-walter_08.html
- Berger, P. (1970). *El dosel sagrado*. Buenos Aires: Amorrortu.



Boito, M. E. (2015). El consumo: forma de identificación socio-comunicativa hegemónica en el marco del capitalismo como religión. *Revista Latinoamericana de Comunicación*, 229-247.

Caillois, R. (2013). *El hombre y lo sagrado*. México: Fondo de cultura económica.

Deleuze, G. (1990). ¿Qué es un dispositivo? En *Michel foucault, filósofo* (págs. 155-163). Gedisa.

Durkheim, E. (2007). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Ediciones Akal.

Fondo, M. (2019). *Fondo Monetario Internacional*. Obtenido de <https://bit.ly/3nuqjgJ>

Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica: curso en el Collège de France (1978-1979)*. México: Fondo de Cultura Económica.

Gilles, D., & Guattari, F. (2006). *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. España: Pre-Textos.

Guattari, F. (2000). *Cartografías esquizoanalíticas*. Buenos Aires: Manantial. Han, B.-C.

(2017). *La sociedad del cansancio*. España: Herder Editorial.

La Jornada, México. (2000). *Michel Camdessus, de banquero a consultor de Juan Pablo II*. Obtenido de <https://www.jornada.com.mx/2000/08/13/016n1eco.html>

La Nación. (2002). *Stiglitz volvió a cargar contra el FMI*. Obtenido de <https://www.lanacion.com.ar/politica/stiglitz-volvio-a-cargar-contr-el-fmi-nid398467>

Lazzarato, M. (2013). *La fábrica del hombre endeudado - Ensayo sobre la condición neoliberal*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.



Reconfiguraciones en la lucha Dreamer de Arizona ante la política migratoria de Trump.

María José Grisel Enríquez-Cabral
Ismael García Castro

Resumen

Este trabajo investiga las dinámicas de involucramiento y apatía en el Movimiento Dreamer de las familias de estatus migratorio mixto (FEMM) que residen en la zona metropolitana de Phoenix, Arizona. Es un estudio longitudinal de dos etapas: en el año 2015, acudimos a dicha zona, para indagar las razones de involucramiento y apatía de las FEMM en el Movimiento Dreamer durante la presidencia de Barack Obama. En el año 2018, se realizaron reentrevistas semiestructuradas a FEMM interrogadas en la primera fase, para identificar posibles cambios en las dinámicas de involucramiento y apatía en el *movimiento dreamer* a partir de la administración Trump. Nos apoyamos en el supuesto de que las políticas antiinmigrantes de Trump causarían un auge en el involucramiento de los miembros de las FEMM en el movimiento Dreamer para continuar en la lucha por su inclusión social. Asimismo, suponíamos una relocalización de las familias a regiones con políticas promigrantes; o a sus comunidades de origen en México. Sobresalen algunos resultados: A) no hay una percepción de intensificación del ambiente antiinmigrante en Arizona, ni del Movimiento Dreamer. Los entrevistados destacan que el escenario antiinmigrante fue un proceso cognitivo que favoreció el desarrollo de habilidades y conductas que minimizan el riesgo del actual contexto. B) Por otro lado, la voluntad de nuestros entrevistados, especialmente jóvenes, es “permanecer [en Arizona] a pesar de todo”; aquellos que contaban únicamente con redes familiares o de amistad, son más propensos a considerar el regreso a México como una posibilidad, que quienes, además de dichas de redes, cuentan con el apoyo de ONGs. C) Por último, existen antagonismos respecto al rumbo que debe tomar el Movimiento Dreamer, los informantes destacan la necesidad de educar una nueva ola de dreamers

Palabras clave

Inclusión social; Políticas antiinmigrantes; Movimiento Dreamer; Familias de estatus migratorio mixto, Arizona



Introducción

Conceptualmente, las familias de estatus migratorio mixto, se distinguen como aquellas conformadas, por lo menos, un miembro sin documentos y otros con ciudadanía o algún tipo de estatus migratorio formal, como permiso de residencia o de acción diferida o DACA, como se le conoce a esta categoría migratoria. Las familias de estatus migratorio mixto, particularmente en Estados Unidos, son el resultado, en buena medida, de las políticas y leyes antinmigrantes por medio de las cuales se condicionan los derechos de los que pueden gozar los miembros de una sociedad con base en poseer ciudadanía o no (Massey y Pren, 2013; Durand, 2013; Gózález y Terriquez, 2013; Passel y Taylor, 2010). Es una característica del liberalismo estadounidense que los derechos, teórica y formalmente, sean otorgados sólo a aquellos que pueden demostrar su pertenencia legal, mientras quienes carecen de esta se enfrentan frecuentemente a situaciones de exclusión. Sin embargo, cómo veremos más adelante, el liberalismo no está totalmente dado, ni tampoco lo está la exclusión.

Algunos miembros de las familias de estatus migratorio mixto, mayoritariamente los jóvenes, se han involucrado en acciones de activismo para pugnar por la aprobación de leyes que favorezcan la regularización de los miembros indocumentados del núcleo familiar y su acceso a derechos sociales.

Es preciso acotar, que de una entidad a otra podemos notar diferentes niveles de exclusión, esto debido al grado de autonomía del que gozan los estados y que les permite establecer sus propias políticas migratorias. Por ejemplo, dos estados disimiles en esa cuestión son California y Arizona; mientras que en el primero el discurso a la migración indocumentada es de tolerancia, el gobierno de Arizona se ha dedicado a limitar el acceso a derechos sociales de las familias de estatus migratorio mixto, lo que ha provocado que algunos de los miembros de estas familias desarrollen ciudadanía activa para lograr una mayor inclusión en el goce de derechos sociales. Un ejemplo heurístico de ciudadanía activa lo constituye la lucha por la aprobación de la iniciativa de ley conocida como DREAM Act. Esta propuesta de ley está dirigida a reconocer derechos formales a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos a corta edad, llevados por sus padres. Se estima que más de dos millones de personas en Estados Unidos podrían ser elegibles para el estatus legal bajo esta propuesta (Batalova et al, 2014).

Aunque en los años pasados la propuesta de la DREAM Act no logró pasar ninguna de las Cámaras, recientemente se ha retomado el debate en torno a esta. Uno de los



grandes frutos del *movimiento dreamer*, fue la Acción Diferida (*Deferred Action for Childhood Arrivals*) más conocida por sus abreviaturas DACA, que otorgó Barack Obama en el 2012. Este decreto serviría para aliviar temporalmente la problemática de exclusión social que enfrentaban algunos miembros de las familias de estatus migratorio mixto en derechos sociales como el trabajo y educación superior. No obstante la inclusión que hasta ahora se había ganado se ve amenazada con el Plan de Inmigración del presidente Donald Trump que, entre otras medidas, ha propuesto recortes drásticos en la inmigración legal, con el fin de reducir hasta en un 40 por ciento la inmigración por naturalización: los estadounidenses perderían el derecho a solicitar la naturalización de sus padres, hijos adultos o casados, o hermanos; únicamente podrán petitionar la naturalización de sus cónyuges e hijos menores de edad. A su vez, el Plan de Inmigración tiene entre sus objetivos promulgar mejoras radicales en la seguridad de las fronteras, esto acompañado de un reforzamiento en los procesos de deportación de migrantes indocumentados (Gellat y Pierce, 2018). Una de las acciones más contundentes de Trump fue retirar la DACA que había sido otorgada por Obama, lo cual deja nuevamente en la exclusión e incertidumbre a más de dos millones de jóvenes (Barros, 2017).

Marco teórico

La presente investigación se inserta en el debate teórico y político de la conceptualización de ciudadanía que pone en aprietos a las democracias cuando se les plantea la pregunta ¿qué tantos derechos deben otorgárseles a los migrantes, o hasta dónde deben ser incluidas las minorías que residen en sus territorios? (Ruvalcaba y Torres, 2012). La ciudadanía en su definición encierra una función dicotómica, al tiempo que incluye, excluye; enajena a los individuos en ciudadanos, inmigrantes, residentes, etcétera. Son categorías sistémicas que tratan de delimitar los caminos por los cuales deberán *buscar su felicidad*. La pertenencia jurídica está dada a partir la ciudadanía, y en tanto que la primera falte, estará ausente también la inclusión política y social (Besserer et al, 2006; Sen, 2000). Esta situación resulta particularmente cruda y complicada para todos los miembros de familias de estatus migratorio mixto, ya que la exclusión de la cual son objeto quienes no poseen documentos, se extiende a los miembros con ciudadanía o con residencia formal, y afecta el acceso pleno a sus derechos como parte de una misma familia, es decir, son sujetos de inclusión desigual (Sen, 2000; Batalova y Terrazas, 2010).



Particularmente, los hijos de inmigrantes que han nacido en Estados Unidos, son sujetos de inclusión desigual, ya que su desarrollo se puede ver limitado por el estatus legal de los padres y por el contexto social que restringe el desarrollo normal de la familia. Se ha documentado que los miembros de las familias mixtas con estatus migratorio formal tienden a restringir su derecho a utilizar servicios públicos, en ocasiones, tan básicos como la salud o la educación, por temor a que los miembros indocumentados puedan ser más visibles y aumente el riesgo de su deportación (Galindo, 2009; Hamann y Zuñiga, 2011; Valdez-Gardea, 2011).

El acceso desigual y la exclusión sistemática a sus derechos es lo que ha motivado a algunos miembros de estas familias a movilizarse políticamente a través de la práctica de ciudadanía activa. Ejercer la ciudadanía activa, presupone la lucha por derechos civiles, políticos y sociales (Escobar, 2007). Por cuestiones de extensión, resulta impropio abordar cómo la ciudadanía activa logra la inclusión en cada derecho, por lo cual nos enfocamos en los derechos básicos, que aluden a la participación “igualitaria” del bienestar existente de una sociedad (Escobar, 2007:234; Ruvalcaba y Torres, 2012:36), como el derecho a ganarse dignamente la subsistencia a través de un empleo y el acceso a servicios básicos como la salud y la educación superior

Los procesos de integración social y de construcción de ciudadanía activa están matizados por diversos factores *objetivos*: patrones generacionales, marco institucional gubernamental, escolaridad, dominio del inglés, estatus migratorio, redes sociales, y lugar de residencia (Rumbaut, 2006; Galindo, 2009; Giorguli y Leite, 2010; Montoya y Woo, 2011). Cada uno de estos factores guarda una relación estrecha entre ellos y la forma en la que se presentan en cada miembro de las familias de estatus migratorio mixto, produciendo diversos procesos de integración social y de ciudadanía activa. Por ejemplo, los patrones generacionales (edad o tiempo de arribo), cada miembro atiende diferentes *marcos institucionales*, o conjunto de reglas o políticas, que rigen el acceso o exclusión a derechos sociales (Rumbaut, 2006; Galindo, 2009; Giorguli y Leite, 2010).

Dimensión del análisis

Los datos dan muestra de cómo las familias de estatus migratorio mixto, las cuales incluyen al menos un adulto indocumentado y al menos un menor con ciudadanía estadounidense por nacimiento, han ido consolidando su presencia en Estados Unidos. En 2003, había 2.7 millones de menores con ciudadanía estadounidense, viviendo en familias donde al menos uno de los padres era indocumentado; en el año 2008, dicho número se elevó a 4 millones, y para 2011, aproximadamente 9 millones de personas



conformaban las familias de estatus migratorio mixto en Estados Unidos (Passel y Cohn, 2009; Taylor et al, 2011). En 2011 había 400 000 menores inmigrantes indocumentados en familias, que tienen hermanos nacidos en Estados Unidos (Taylor et al., 2011:6; Wasem, 2011). En Arizona, para 2010, residían cerca de cincuenta mil familias de estatus migratorio mixto, que incluyen más de setenta mil miembros indocumentados (Taylor et al., 2011).

Por otra parte, en Arizona, la participación de los votantes latinos fue mayor que en otros estados (77%), lo cual hace suponer que las familias de inmigrantes y, particularmente, las de estatus migratorio mixto, están mayormente interesadas en el éxito de iniciativas legales como la Dream Act (Passel y Cohn, 2009; Immigration Policy Center, 2012). Otro aspecto relevante en el contexto de Arizona, es la agudización, particularmente en las últimas dos décadas, de la presentación y aprobación de leyes y políticas punitivas contra los inmigrantes (Magaña, 2013; 2015; Vereza, 2014). Por ejemplo, en el año 2000, se aprobó la Propuesta 203, que prohíbe la educación bilingüe en las escuelas públicas y obliga a proporcionar enseñanza únicamente en el idioma inglés.

En 2004, se impulsó en Arizona la Proposición 200, la cual requiere que las agencias gubernamentales verifiquen la identidad y el estatus migratorio de las personas para el acceso a servicios de salud, otros beneficios sociales, y para ejercer el voto. En 2005, la legislatura de Arizona sancionó, entre otras 30 iniciativas de carácter antiinmigrante, la “Human Trafficking Violation”, o Propuesta ARS 13-2319, la cual busca ampliar la definición de traficante de personas a quienes transporten, hayan transportado o utilizado propiedades para transportar a personas indocumentadas, convirtiendo en violador de la ley a, prácticamente, la mayoría de los habitantes de Arizona (Capps et al., 2011). Ese mismo año, se presentó la Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act (H.R. 4437), también llamada *Sensenbrenner Bill*, la cual tenía como principal objetivo criminalizar la inmigración indocumentada. Para el 2006, sobresalen cuatro iniciativas de ley de corte antiinmigrantes promulgadas en Arizona: La Proposición 100, la 102, la Propuesta 103, y la Proposición 300. En 2007, destacan, la iniciativa HB 2460, la cual prohíbe aceptar identificaciones consulares como documento oficial de identidad; y la HB 2181, que, en el marco de la aprobación de la Propuesta 287g, autoriza fondos estatales para el reforzamiento de leyes migratorias. En 2008, entró en vigor la “Legal Arizona Worker Act” (LAWA), que requiere que los empleadores verifiquen el status migratorio de sus empleados en el sistema federal *E-Verify*, penalizando además el uso de una identidad que no es la propia para laborar.



En este mismo año, se aprueban entre otras iniciativas de ley contra la inmigración, la HB 2807 y la HB 2359; la primera, requiere que los oficiales de condados y municipios apoyen la procuración de leyes migratorias, y la segunda, autoriza a jefes de departamentos de policía y alguaciles del estado a entrenar agentes para que ejerzan sobre leyes de migración, sin necesitar la aprobación de los consejos municipales o la Barra de Supervisores del Condado. En 2009, la ley HB 2306, limitó las oportunidades laborales de las personas sin status migratorio regular, lo mismo que la economía de la entidad, al exigir la ciudadanía o residencia legal para obtener una licencia de negocios (Montoya y Woo, 2011).

En 2010, se presentó en la legislatura de Arizona, la iniciativa SB 1070, que viene a resumir toda esta embestida legal contra los inmigrantes. Considerada una de las más agudas y discriminantes propuestas antiinmigrantes que se hayan presentado en Estados Unidos. Esta iniciativa, pretendía facultar a las autoridades estatales para ejercer sobre las leyes federales de inmigración (Magaña, 2013; 2015). Autoriza a las policías locales a revisar el estado migratorio de las personas que detienen, así como permite se les retenga hasta determinar su estatus migratorio. La SB 1070, obliga a los residentes extranjeros a portar documentos que verifiquen su calidad migratoria y penaliza, como crimen o felonía, la contratación o transporte de una persona indocumentada. Permite, asimismo, el arresto sin una autorización legal cuando se considere que exista una *causa probable* de que ha cometido una ofensa que amerita la deportación. Esta iniciativa, buscaba también, otorgar mayores recursos para fiscalizar y sancionar a quienes contraten a inmigrantes no residentes.

No es propósito de este trabajo, abordar el análisis de cada una de estas leyes, propuestas y políticas antes referidas, no obstante, resulta importante enfatizar la trascendencia negativa, que tuvieron para la comunidad migrante, algunas de ellas por su carácter persecutorio y policiaco como: la HR 4437, la Proposición 300, la HB 2807 y la HB 2359, y muy particularmente la SB 1070. A partir de este contexto, se busca analizar la experiencia de involucramiento de los entrevistados, en la lucha por acceder a derechos sociales como el trabajo y educación superior.

Enfoque metodológico

En este trabajo, vierte los resultados de una investigación longitudinal que requirió de dos etapas: la primera realizada en el 2015 y la segunda en el 2018, tomamos como ejemplo heurístico de ciudadanía activa la lucha del *movimiento dreamer*. Cabe enfatizar que, más que los resultados de esta lucha, nos interesa analizar el proceso, es decir,



los cambios en las dinámicas de involucramiento en el actual contexto demarcado por las medidas migratorias de Donald Trump.

La expectativa de aprobación de la DREAM ACT, contemplaba no solo el acceso a beneficios sociales como la educación superior, sino un camino hacia la obtención de la ciudadanía formal, lo que significaría asegurar la oportunidad de gozar de cualquier tipo de derechos o privilegios. Con la promulgación del DACA, por un lado, se amplió la complejidad de las familias de estatus migratorio mixto al crear una nueva categoría migratoria y, por otra parte, el decreto pareció servir para diluir parte del activismo y las demandas del movimiento *dreamer*. Lo que es un hecho, es que con el DACA, la lucha de los *dreamers* y sus familias ha evolucionado en varias vías, que van desde continuar la lucha por el reconocimiento completo de derechos, pasando por la pretensión de lograr diversos beneficios sociales concretos como, por ejemplo, la obtención de un empleo, una licencia de conducir o el acceso a una beca de educación superior, hasta las mayores actitudes de apatía o conformismo. Después de que la DACA ha sido eliminada en el gobierno de Trump es importante identificar las nuevas rutas que seguirá el *movimiento dreamer*. Con base en las reflexiones anteriores y sustentándonos en el enfoque teórico-metodológico de la Teoría Fundamentada o *Grounded Theory*, el objetivo de nuestra investigación fue indagar sobre los cambios en las dinámicas de involucramiento en la DREAM Act, así como las reacciones de los miembros de las familias de estatus migratorio mixto ante la eliminación de la DACA a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia.

La Teoría Fundamentada debe entenderse como la forma de adquirir conocimiento sobre el mundo social, a partir del análisis de situaciones concretas de la realidad (Strauss y Corbin, 2002; Charmaz, 2006; Arzate, 2007). El sustento de esta perspectiva metodológica, implica emprender un proceso de construcción y retroalimentación de la realidad estudiada, haciendo uso de métodos de recopilación de información de tipo predominantemente cualitativo, eminentemente empírico y básicamente amparado en la investigación-acción u observación participante. Es decir, la recogida y análisis de información cimentada en las percepciones, ideas y el contexto de vida concreto de los involucrados. Lo anterior, mediante el uso de técnicas de investigación como etnografía, entrevistas a profundidad y trayectorias o historias de vida. Más allá de lo que la teoría determina, esta perspectiva de análisis, resulta también importante porque da voz a los actores.



Nos planteamos la interrogante ¿qué cambios en las dinámicas de involucramiento e inclusión social presentan los miembros de las familias de estatus migratorio mixto que residen en Arizona a partir de las medidas migratorias de Donald Trump? . Consideramos como principal supuesto que debido a las políticas antiinmigrantes proclamadas por Trump en su Plan de Inmigración, el Movimiento Dreamer tomaría auge lo que, a su vez, aumentaría el involucramiento de los jóvenes dreamers y sus familias con el propósito de hacerle frente a la adversidad que presupone las medidas comprendidas en dicho plan y continuar con su proceso de inclusión social. Asimismo, supusimos que se llevaría a cabo un proceso de relocalización residencial de las familias de estatus migratorio mixto a estados o ciudades con políticas pro migrantes; o bien, a sus comunidades de origen en México.

El estudio considera al núcleo familiar como la unidad de análisis y se apoya en instrumentos como la entrevista a profundidad semiestructurada, para permitir que las personas entrevistadas expresaran, de manera abierta y amplia, sus percepciones, experiencias de vida, e ideas sobre la lucha de las familias y comunidades de inmigrantes por acceder a beneficios sociales como la educación superior y trabajo. Las entrevistas se aplicaron en las ciudades de Mesa y Phoenix, ubicadas en el Área Metropolitana de Phoenix, Arizona que muestra una importante cantidad de familias de estatus mixto.

El análisis plasma los testimonios de doce miembros de familias de estatus migratorio mixto que fueron entrevistados en el 2015 y reentrevistados en el 2018, lo cual nos permite establecer las diferencias que presentan las dinámicas familiares e individuales de inclusión social e involucramiento. Si bien en algunas partes del presente artículo se hace referencia a algunos de los hallazgos del primer trabajo empírico, damos prioridad a la descripción y análisis de los últimos resultados, dado que anteriormente ya se ha publicado un artículo que comprende las conclusiones de la primera etapa de este estudio.

La lucha DREAMER sigue, pero ya no tan intensa

Nuestra hipótesis aseguraba que, debido al contexto adverso, la percepción de un ambiente antiinmigrante y, en consecuencia, el movimiento Dreamer aumentarían en quienes viven en el estado de Arizona. Empero, nuestras entrevistas constataron lo contrario: entre los entrevistados, no hay una percepción de que actualmente se haya intensificado el ambiente anti inmigrante en Arizona, así como tampoco el Movimiento Dreamer. Los argumentos de los entrevistados versan en el sentido del que nos



proporcionó Carmen, quien asegura lo siguiente: “*el ambiente está igual, no creo que esté más difícil o más agudo que antes*” (Carmen; Mesa, 2018), asimismo, los entrevistados coinciden que haber enfrentado y superado escenarios antiinmigrantes como el que alguna vez fue propiciado por la SB1070 y la Proposición 300 les ha sido útil, pues ahora ya no sienten <<tanto>> miedo. Es decir, no hay una interiorización del peligro que, nosotros como investigadores, considerábamos imperante. La adversidad, que en su momento representó una amenaza, se convirtió en una experiencia cognitiva cuya vivencia, según los testimonios de los entrevistados, les permitió desarrollar nuevas habilidades y conductas que minimizan el riesgo que representa el actual escenario marcado por una retórica xenófoba.

Entre las principales habilidades, señalan que aprendieron a leer en inglés para mantenerse más informados de los asuntos político-migratorios que repercuten en el acceso a derechos sociales como educación universitaria, trabajo o de la unidad familiar. Leer el periódico en inglés, buscar noticias sobre migración en sitios de internet e informarse sobre sus derechos como migrantes, aunque parecieran acciones simples han dado grandes resultados para las familias de estatus migratorio mixto y para los dreamers en general; dichas prácticas son un resultado en sí mismas. Es decir, antes de que se propusieran medidas antiinmigrantes a través de la SB1070 y de la Proposición 300 los dreamers y sus familias no realizaban con tanta regularidad estas acciones, pero fue necesario adoptarlas debido a que las iniciativas xenófobas ponían en riesgo sus planes de vida y agudizaba el sentimiento de incertidumbre. Desarrollar este tipo de aprendizajes contribuyó favorablemente en la disminución de estrés e incertidumbre que causaba la desinformación, mismos que repercutían negativamente en la convivencia familiar; a la vez, que los ha preparado para saber cómo actuar y qué hacer ante las estipulaciones antiinmigrantes del presidente Donald Trump las cuales han agudizado agudizamiento de la sensación de incertidumbre y ansiedad.

En la administración de Obama, ni la ansiedad ni la incertidumbre eran recurrentes, dado que con la DACA se había ganado cierta seguridad social a través del acceso a derechos como lo fue un permiso para trabajar y estudiar sin peligro de ser deportado (Enríquez-Cabral, 2018), esto proporcionó mayor certidumbre de lo que deparaba el futuro para los jóvenes Dreamers y sus familias, lo que consecuentemente desalentó el movimiento Dreamer. En cambio, con Trump en la presidencia, los entrevistados comentan que han vivido cambios anímicos, estos se traducen generalmente en cambios de prácticas. Si bien, los informantes consideran que ni ansiedad, ni la



incertidumbre se sienten con la misma intensidad como con la que la sintieron en la época de la SB1070 y la Proposición 300, la preocupación que deviene de éstas ocasionó que quienes habían desertado del movimiento Dreamer volvieran a involucrarse.

El devenir entre el involucramiento y la desertación al movimiento Dreamer está ligado estrechamente a las circunstancias, lo mismo sucede con las dinámicas de vida, no son lineales. Por ejemplo, algunos de los entrevistados ya habían encontrado algún tipo de trabajo que no se relaciona con el activismo: *“estábamos haciendo nuestras vidas normalmente, como lo haría cualquier persona. La DACA nos había dado esperanza, pero ahora que está por desaparecer hay que buscar qué hacer para mantenerse a salvo, y una de esas opciones es volver al movimiento”*, nos comentó José (entrevista en Phoenix, 2018). Sin embargo, su reincorporación al Movimiento Dreamer no significa un abandono de su trabajo habitual, sino una combinación de este con las labores de activista. Cuando Barack Obama era presidente, José era uno de los líderes del Movimiento Dreamer en Arizona, y varios miembros de su familia estaban involucrados plenamente en el activismo, aunque ahora, ante las amenazas de Donald Trump, ha considerado necesario volver a involucrarse, puntualiza lo siguiente: *“el activismo ya no es el centro de mi vida, es necesario continuar viviendo lo más normalmente posible”* (José; Phoenix, 2018).

En ese mismo sentido, está el testimonio de Reyna, quien converge con José en que la incertidumbre y la ansiedad se han agudizado desde de que Donald Trump está al mando de la presidencia. Como una respuesta a ello, Reyna ha decidido impulsar su propia ONG llamada “Aliento”, en la cual, entre otras cosas, busca a través del baile, y otras actividades, canalizar dichas emociones, esto en beneficio tanto de ella como de todas aquellas personas que son parte de esta organización. También, optó por acudir a psicólogos para obtener asesoría al respecto de cómo manejar sus emociones.

A su vez, los entrevistados comparten una característica: entre sus conductas señalan que se han vuelto más selectivos de la cantidad de noticias que leen por día y de los medios que las publican. Según algunos de los testimonios *“Sobreinformarse, leer muchas noticias, causa estrés y ansiedad; [lo que a su vez] nubla la mente y no deja pensar de manera correcta, informarse de más perjudica, produce más miedo”* (Erick, Phoenix; 2018).

Hasta aquí podemos señalar, que si bien el miedo no ha desaparecido de la subjetividad de los sujetos, estos al contar con determinados medios o recursos pueden hacerle



frente y continuar avante con su vida y con sus procesos de inclusión social. Mismos que favorecen en la disminución de incertidumbre y estrés, variables sobresalientes en el discurso de nuestros entrevistados. El miedo es un factor que aparece constante, no obstante, tampoco parece haberse visto agudizado ante las iniciativas de Donald Trum; las políticas antiinmigrantes como la SB1070 y la Proposición 300 que señalamos casi al principio de este apartado, les dieron a los entrevistados un cierto grado de experiencia en el manejo del miedo. Ahora bien, los recursos y medios que han adquirido, son en sí mismos una construcción histórica: la acumulación de dos o más medios y recursos permite trazar distintas dinámicas de involucramiento o apatía y de inclusión social.

Entre los principales recursos, como bien se puede observar en los testimonios, está el papel fundamental que juegan las ONGs, pero más precisamente la ayuda en especie, como becas o prestamos, y la información que se puede obtener de estas. Poseer o no información pertinente de lo que sucede en el ámbito migratorio, es uno de los recursos más importantes y hace una notable diferencia entre quienes logran o no incluirse socialmente. Así lo veremos en el siguiente subtema.

“La información es poder”

El subtítulo entrecomillado, es una máxima muy conocida y que también está interiorizada en la subjetividad de nuestros entrevistados. Carmen, dentro de su testimonio hace mención justamente de esa máxima: “La información es poder (...) de las claves para el éxito es la información y las redes (...), aprender a informarse cambió la vida de muchas personas tanto de las que estaban dentro o fuera del movimiento dreamer. También cambió la dinámica del movimiento Dreamer, pues las personas se volvieron más preparados; aprendieron más sobre cómo defenderse, por ejemplo, de la migra”

Los dreamers suelen socializar dentro y fuera de la familia los contenidos de las noticias, lo que consecuentemente produce un proceso epistemológico. Como mencionamos anteriormente, los dreamers y sus familias logran aprender sobre leyes y temas migratorios, y los conocimientos que en ese proceso adquieren ayudan a los miembros de las familias a distinguir los riesgos con mayor claridad y a conducir sus esfuerzos o estrategias de manera asertiva: *“se piensa detenidamente la situación y los riesgos que implica, para definir una estrategia adecuada. Antes hacíamos desobediencias civiles continuamente, pero hoy hemos visto que hay que tener cuidado con las estrategias que desarrollamos y no ‘quemarlas’ si no hay una justificación adecuada”* (Reyna, Mesa;



2018). Asimismo, en la socialización de la información se definen los tiempos de acción, esto significa que la ciudadanía activa de los DREAMERS y sus familias es intermitente, pero no por ello es menos efectiva, ya que se focalizan y priorizan las iniciativas antiinmigrantes contra las que se debe luchar.

Como hemos visto, la posesión de la información influye directamente, en la conducta de los individuos, en su manera de socializar con el exterior; pero también es preciso tener presente la importancia que cobra la información al interior de los hogares: cuanta más información se posea, más asertiva se vuelve la toma de decisiones del núcleo familiar o de alguno de sus miembros

En suma, en este apartado se da cuenta de la trascendencia que cobra la “información” y la socialización de ésta. Asimismo, en los testimonios podemos advertir la evolución que ha tenido el Movimiento Dreamer, esto no sólo lo vemos ejemplificado en la focalización de los esfuerzos del activismo, sino también la combinación de dos o más estrategias, según nos cuenta uno de los entrevistados *“a veces combinamos dos o más acciones, por ejemplo, a la par de una huelga de hambre para evitar un proceso de deportación, se llevan a cabo convocatorias para que la gente realice llamadas masivas a fin de detener la deportación. Las estrategias, por lo menos en la ONG en la que yo estoy, ya no son utilizadas indiscriminadamente, sino que se utilizan a conciencia”*, es decir, se procura que cada estrategia que se utiliza por los dreamers se justifique cabalmente, lo que implica en cierta medida que sea un acto racional. Para una <<adecuada>> racionalidad e instrumentalidad de las estrategias, los sujetos señalan que es preciso *“estar siempre bien informados”*.

La voluntad de permanecer, A pesar de todo

La hipótesis que suponía una posible relocalización de las familias de estatus migratorio mixto o de algunos de sus miembros ha quedado desfasada de los hallazgos del trabajo de campo. En contraste, los testimonios de nuestros informantes dan cuenta de que no están considerado en sus planes un cambio de domicilio habitual ni al interior de Estados Unidos, ni fuera de éste. En algunos padres, si bien existe un <<deseo>>, de volver a México, por el momento no han desarrollado la <<voluntad>>. Aunque la voluntad es la de permanecer en Arizona, algunos padres indocumentados no descartan el riesgo o amenaza latente de una deportación, por ello han empezado a tomar medidas de prevención como las de tramitar la doble nacionalidad a los hijos que nacieron en Estados Unidos. Si consideramos que este pudiera no ser un caso aislado, entonces



podemos advertir la necesidad de que el gobierno mexicano prepare los recursos humanos y materiales suficientes para agilizar estos procesos de nacionalización.

Por otra parte, están los jóvenes de 1.5 y segunda generaciones de las familias de estatus migratorio mixto, existe en ellos un sentido de pertenencia a Arizona, no es extraño que esto sea así dado que estamos hablando de individuos que se educaron y crecieron en dicho estado *“Arizona es mi casa y de aquí no me voy a menos que me echen”* comentó Reyna, joven dreamer. En el caso de los jóvenes ciudadanos el retorno, no se presenta como una posibilidad; en cambio, para los jóvenes dreamers Dreamers, el retorno sólo se vislumbra posible si es por deportación, pero en ninguna de estas dos generaciones hay una voluntad propia de volver a México o de cambiar de ciudad dentro de Estados Unidos. Incluso en los argumentos se observa la importancia que cobra contar con ciertos recursos como educación universitaria, pues esto permite a algunos de nuestros entrevistados mantener un estado de confianza de que, en caso de que una deportación suceda, sus estudios favorecerán su integración o inclusión social, así lo plasma en su comentario uno de nuestros entrevistados *“sí [la deportación pasara] me regresaría a México y me buscaría la vida con la carrera que tengo, desprotegido no me siento; pero quiero mantener una actitud positiva de que nada pasará”*.

La DACA que obtuvieron durante el gobierno de Barack Obama fue uno de los factores que incluirse socialmente, algunos Dreamers aprovecharon el periodo en el que tuvieron DACA para comprar casas, carros y demás propiedades que les aseguran un futuro menos incierto. Una propiedad, da arraigo y favorece la consolidación de un sentido de pertenencia. Por otra parte, las redes de apoyo con las que cuenta la familia o alguno de sus miembros, son otro de los factores que facilita la permanencia. De acuerdo a los señalamientos de nuestros entrevistados, especialmente el de Carmen, además de la información, la adscripción a ONGs resulta trascendente en el proceso de inclusión social: aquellos que logran incursionar en redes que son generadas por medio de su involucramiento a organizaciones sociales pueden desarrollar mayores posibilidades de quedarse en Arizona, que aquellos que únicamente se apoyan en redes familiares o de amistades.

La polarización del movimiento DREAMER

Un hallazgo interesante y que no habíamos considerado en la hipótesis central, es la presencia de polarizaciones en el Movimiento Dreamer. Hasta el año 2015, año en el que se realizó la primera etapa de este estudio longitudinal, el rumbo del Movimiento Dreamer parecía estable y había, si no una unanimidad, respecto a los ideales y



objetivos que guiaban el movimiento, sí un acuerdo más o menos generalizado y compartido por las diferentes ONGs y activistas de Arizona; se había optado por considerar como prioridad la lucha, ya no por la aprobación de la Dream Act sino, por la detención de deportaciones. Sin embargo, las nuevas entrevistas dan cuenta de ciertos conflictos entre algunas de las ONGs, pues los entrevistados consideran que algunos de sus líderes activistas se han politizado, lo que consecuentemente ha desvirtuado el fin esencial del movimiento *“hay compañeros y compañeras dreamers que están trabajando para políticos, como por ejemplo Bernie Sanders o Hillary Clinton; y bueno, se comprende que están haciendo su lucha para sacar adelante sus familias, pero trabajar para un político y estar dentro del movimiento Dreamer, es una contradicción”*.

Además de lo anterior, se ha estado observando una diversificación de las “luchas” entre los dreamers: ya no se involucran únicamente en luchas relacionadas con el acceso a derechos sociales, sino que han estado siendo reclutados por ONGs, que tienen otros fines, por ejemplo, en pro de energías limpias, de defensa de los animales, etc. Esto ha ocasionado que activistas <<experimentados>>, dejen el Movimiento Dreamer, lo que puede conllevar a un debilitamiento paulatino del mismo.

Este tipo de situaciones han llevado a la generación de polarizaciones, existe una división de opiniones entre algunos grupos de activistas referente a dos aspectos: 1) acerca de las prioridades y objetivos que deben regir el Movimiento Dreamer y 2) de la utilidad que tiene el activismo como generador de inclusión a derechos sociales pues hay quienes consideran que los resultados que se han obtenido no son proporcionales al esfuerzo que han hecho los activistas. Del primer punto, entre los entrevistados hay quienes consideran que las luchas grandes se ganan de *“poquito en poquito”* (entrevista a Reyna; Mesa, 2018) que es más viable ir obteniendo derechos de uno en uno, que enfocar todos los esfuerzos en la aprobación de una Ley, como la DREAM Act, o de una reforma que los integre todos; también hay quienes consideran todo lo contrario.

Respecto al segundo punto, sobresale la idea de que el activismo ya no tiene la fuerza de antes y, algunos de nuestros informantes, reflexionan sobre la necesidad de impulsar procesos de socialización para *“organizar, educar, y movilizar los dreamers que nunca salieron a las calles (...), necesitamos de una nueva ola de Dreamers activistas que energice y de valor al movimiento. Las organizaciones nacionales [y un número considerable de activistas] se han acercado mucho a los demócratas y no creo que piensen claro”* (entrevista a José, Phoenix, 2018)



Para reflexiones finales

La adversidad si bien tiene un escenario físico/estructura, también tiene un escenario subjetivo, esto quiere decir que no sólo somos una construcción de lo que el sistema determina, sino también somos constructores del mismo (Enríquez-Cabral, 2018). En ese sentido, la adversidad no puede ser vista como resultado de la suerte, si bien en ella intervienen eventos aleatorios, es una consecuencia de nuestra propia experiencia de vida de la combinación de distintas lógicas de acción, recursos y actores que se ponen en juego.

Como lo pudimos observar en las entrevistas, la adversidad, por sí misma, fue uno de los factores que condujo a algunos de nuestros entrevistados a contextos de mayor inclusión social. Lo adverso o antagónico a la acción social de los sujetos, produce procesos cognitivos donde los individuos, a través de la interiorización de la información adquirida en la socialización (re)construyen o deconstruyen su identidad. Esta última, entre otras cosas, imprime una cierta personalidad: valores, conductas, normas, creencias, etc., que delimitan el <<papel>> de los sujetos frente a lo que pueden considerar o no como adverso. Dentro de este proceso cognitivo, se desarrollan nuevas personalidades, se adoptan nuevas conductas, se abandonan otras; o bien, se moldean las viejas conductas. Aquellas conductas que en un tiempo fueron parte de la esencia de la personalidad del sujeto, en un momento dado pueden ser vistas por él mismo como <<no deseadas>> o <<negativas>>, y son desplazadas por otras que pueden ser favorecedoras de la inclusión social y de desarrollo de activismo.

Suelen haber, preponderantemente dos <<papeles>> interiorizados entre nuestros entrevistados: a) los que se consideran víctimas del sistema, y b) los que se describen a sí mismos como responsables de lo que sucede con su experiencia de vida. A los primeros, la <<realidad>> se les impone como algo inevitable e inmodificable. Los segundos tratan de construir caminos hacia la inclusión social a través de diferentes recursos como es la información, su adscripción a ONGs, dominio del idioma inglés; contrario a las “víctimas”, estos se imponen a la <<realidad>>.

La identidad y la personalidad pueden ser en sí mismas, un recurso que se utiliza de forma pragmática y racional. Sin embargo, consideramos que no existe en nuestros entrevistados una racionalidad pura, sino que en el mismo proceso de racionalidad se incluyen también valoraciones subjetivas. El “pragmatismo” que circunscribe la identidad de los sujetos, da cuenta de lo fortuita y de lo contingente que ésta es. Esto, sin embargo, no significa que la identidad deba considerarse como algo <<débil>> que se



pueda quebrantar al menor soplo. Al contrario, es un cúmulo de símbolos e imaginarios amalgamados, que han ido adhiriéndose al sujeto a lo largo de su vida, que van dando forma y fortaleciendo su proyecto final de vida: la identidad a la que aspira.

Así como sucedió en nuestra primera etapa de trabajo de campo del año 2015, una vez más los argumentos dejan ver que las respuestas que construyen los sujetos para hacer frente a la adversidad, son en gran medida un reflejo de su identidad, de su propia concepción como partes de un todo, y que, incluso, dentro del activismo la acción colectiva se ve fortalecida cuando los participantes comparten ciertos factores identitarios, lo que por ende facilita la supervivencia de los ideales de la lucha del Movimiento Dreamer.

Vemos, que en el contexto de Trump, la lucha Dreamer se ha visto debilitado debido a las diferencias notables en las prioridades y preferencias de los activistas. Las ONGs, son también espacios de conflicto, donde se contraponen “egos” y prioridades individuales que debilitan el fin colectivo. Como bien lo sugirió uno de los entrevistados, es necesario reafirmar lazos a través de procesos de socialización, en los que no sólo se proporcione información pertinente a derechos sociales, sino también un <<adoctrinamiento>> de una nueva generación de activistas dreamers que defiendan los valores y misión de este Movimiento y revigore la identidad del mismo.

En el caso de esta investigación, tanto la inclusión social, como el activismo y la identidad por sí mismas son construcciones colectivas intervenidas por procesos individuales, marcados también por el miedo, la ansiedad, el estrés, la voluntad, el deseo, los cuales adquieren diferentes significados y matices, según el propio horizonte de sentido de los sujetos. Todos estos, pueden ser inhibidores o conductores de inclusión social y de involucramiento en la lucha dreamer.

El deseo y la voluntad, resultan dos variables interesantes de analizar, dada la importancia que imprimen en los planes que tienen los distintos miembros de las familias de estatus migratorio de permanecer en Arizona a pesar de las medidas antiinmigrantes proclamadas por Trump. Sabemos las implicaciones teóricas que tiene escudriñar la conceptualización de <<deseo>> y <<voluntad>>, analizar cada variable pudiera llevarnos a una larga e interminable discusión filosófica y sociológica. No obstante, nos limitamos a describir lo que las entrevistas de nuestros informantes subrayan; el deseo, en el caso de nuestros entrevistados, es la contemplación de un plan, pero sólo la voluntad es la que logra materializarlo. La voluntad de hacer, ser, o estar resulta de la contraposición del “lo deseado” versus “lo necesario”. En sus procesos reflexivos los



entrevistados advierten que a veces lo que se desea, no es justamente lo necesitan o lo más idóneo en ese momento. El deseo y la necesidad son dos extremos de una línea <<imaginaria>> en el medio de ésta se encuentra la justicia. Pero la justicia no adquiere solo tintes legales o morales, es decir, si bien los entrevistados justifican su voluntad de permanecer en Arizona por la contribución económica y social que han hecho a este estado, o por la categoría de “ciudadanos del mundo” (Enríquez-Cabral, 2018) que se encuentra interiorizada en varios de ellos; la justicia es también una cuestión de sentimientos. “Permanecer” en Arizona a pesar de todo, es la reivindicación del sujeto mismo, de su historia, de las acciones que ha puesto en marcha para sobrellevar cada etapa de su vida, es la no rendición.

Otro punto sobresaliente del análisis, es que las redes sociales vuelven a cobrar importancia ante las amenazas de Trump. Como bien pudimos observar en los testimonios, la entrada de la administración Trump, provocó que algunos activistas retomaran su involucramiento en redes sociales, mismo que ya habían dejado de lado. Hay dos cuestiones que nos gustaría subrayar respecto a este punto. La primera es que las redes están desarrollando acciones más enfocadas y especializadas, en lugar de jornadas extensas e intensas de trabajo. Como mencionamos al principio de estas reflexiones, el proceso cognitivo que deviene de la adversidad, ha sido también favorecedor para las redes sociales, ahora hay un <<activismo acupunturista>> o focalizado. La segunda cuestión, tiene que ver con el hecho de que las redes sociales, según su categoría, influyen de manera diferenciada en la permanencia de los miembros de la familia en Arizona. De acuerdo a las entrevistas, aquellos informantes que cuentan únicamente con redes sociales familiares y de amistades, parecen desarrollar menos voluntad y posibilidad de permanecer en el estado de Arizona que aquellos que además de contar con este tipo de redes, están insertos en redes más amplias como las de las ONGs.

Finalmente, nos interesa resaltar el <<valor>> que adquieren en lo subjetivo <<las oportunidades>>. La oportunidad tiene una fecha de caducidad, es más pronta en el caso de los Dreamers o jóvenes DACA, que en el de aquellos que son ciudadanos. Con la llegada de Donald Trump, la oportunidad de hacer/tener algo cobró mayor significado: antes que venciera la DACA varios de nuestros informantes apresuraron sus planes de conseguir un préstamo para poder comprar propiedades, que en lo sucesivo favorecen el goce de otros derechos sociales o civiles. En cambio, aquellos que poseen ciudadanía



ven la <<oportunidad>> como algo que siempre estará allí, que la podrán encontrar o tomar cualquier día que decidan.

Referencias

- Arzate, J (2007). "Los Métodos Cualitativos de Investigación y la Construcción Social del Conocimiento sobre la Desigualdad", revista ORBIS/Ciencias Humanas, Nro. 6, Año 2, 4-17. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2560294>
- Barros, M. (2017). Los efectos del daca en la carrera profesional y las emociones de jóvenes migrantes [The effects of daca in young migrant's professional careers and emotions]. *Estudios Fronterizos*, 18(37), 131-148, doi:10.21670/ref.2017.37. a07
- Batalova, J. y Terrazas, A. (2010). "Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States". Migration Policy Institute. Migration Information Source, Disponible en: <https://bit.ly/3s0GQMx> Consultado el 09/09/2013
- Besserer, F. (1999) "Estudios trasnacionales y ciudadanía transnacional". En Mummer, G. (coordinador), *Fronteras Fragmentadas*, México. Colegio de Michoacán-CIDEM, 215-238
- Capps, R.; Rosenblum, M; Rodríguez, C Y Muzaffar C (2011). *Delegation and Divergence: A Study of 287(g) State and Local Immigration Enforcement*. Migration Policy Institute. Diponible en <https://bit.ly/2LwiOYY> Consultado el 02/01/2011
- Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory A Practical Guide Through Qualitative Analysis*, SAGE, California, Primera impresión.
- Durand, J. (2012). Los dreamers. Disponible en: <https://bit.ly/2XfsnhR> Consultado el: 17/09/2013
- Durand, J. (2013). Nueva fase migratoria. *Papeles de Población*. Volumen 19, Nro 77: 83-113.
- Escobar, C. (2007). "Migración y derechos ciudadanos: el Caso mexicano", en ARIZA M y PORTES, A (Coordinadores). *El país transnacional migración mexicana y cambio social a través de la frontera*, México, Universidad Nacional Autónoma de México. 231-274.
- Galindo, C. (2009). *Nosotros no cruzamos la frontera: los hijos estadounidenses de los migrantes mexicanos*. Consejo Nacional de Población Editor. México. Primera impresión.
- Gelatt, J Y Pierce S (2018) *The Trump Immigration Plan: A Lopsided Proposal*. Disponible en: <https://www.migrationpolicy.org/news/trump-immigration-plan-lopsided-proposal>



Giorguli, S. y Leite, P (2010). "La integración socioeconómica de los mexicanos en Estados Unidos de América, 1980-2005: experiencia y prospectiva. En: Francisco Alba, Manuel Ángel Castillo y Gustavo Verduzco (coords). Migraciones internacionales. El Colegio de México. México, 355-394.

González, R y Terriquez, V (2013). How DACA is impacting the lives of those who are now documented: Preliminary Findings from the National Undocumented Research Project. Disponible en: <http://www.immigrationpolicy.org/just-facts/how-daca-impacting-lives-those-who-are-now-documented> Consultado el 13/10/2014

Hamann, E. Y Zuñiga, V. (2011). Schooling and the everyday ruptures transnational children encounter in the United States and México. En Cohen, C. (et al coords). Every day ruptures. Children, Youth, and migration in global perspective. Estados Unidos. Vanderbilt university press.

Justice for Immigrants (2010). DREAM Act. Background Information. En internet el 09/01/2012. En: <https://bit.ly/3osJqsQ>

Magaña, L (2013). "Arizona's immigration policies SB1070", en Magaña, L y Lee, E. (coords)_latino politics and Arizona immigration law SB1070, Estados Unidos, Editorial Springer.

Magaña, L (2015). Las políticas de inmigración de Arizona: los procesos de un enfoque general, en Vélez-Ibáñez, C (et al coords.) Visiones de acá y de allá. Implicaciones de la política antiinmigrante en las comunidades de origen mexicano en Estados Unidos y México, México, UNAM, ASU, UACJ.

Massey, D. y Pren, K (2013). La guerra de Estados Unidos contra la inmigración. Efectos paradójicos. Documents d'Anàlisi Geogràfica. Vol. 59, Nro 2.

Migration Policy Institute (2015). Arizona Demographics & Social. En internet el 05/05/2016 en: <https://www.migrationpolicy.org/data/state-profiles/state/demographics/AZ>

Montoya, E Y Woo, O (2011). Las familias inmigrantes mexicanas ante las reformas de política migratoria en Arizona. Las percepciones de las leyes antiinmigrantes. rev.latinoam.estud.fam. Vol. 3, pp. 245 - 263. Disponible en: <https://bit.ly/3ooUAi1> - Consultada en 16/09/2014

Passel, J y Cohn, D'vera (2009). A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United States. Pew Hispanic Center. Disponible en: <https://pewrsr.ch/3rYNAKZ> Consultado el 17/09/2012



Passel, J y Taylor, P (2010). Unauthorized Immigrants and Their U.S.-Born Children. Pew Hispanic Center. Disponible en: <https://pewrsr.ch/3pWjtSK> Consultado el 17/09/2012

Rumbaut, R (2006). "Edades, etapas de la vida y cohortes generacionales: un análisis de las dos primeras generaciones de inmigrantes en Estados Unidos de América", en Alejandro Portes y Josh DeWind (coords). Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, UAZ-Miguel Ángel Porrúa, México, 361-409.

Ruvalcaba, D y Torres, C. (2012), "Excluidos y ciudadanos. Las dimensiones del poder en una comunidad transnacional mixteca". Universidad Autónoma Metropolitana y Juan Pablos (Eds). México.

Sen, A(2000). Social exclusion: concept, application, and scrutiny. Social Development Papers Nro. 1.

Strauss, A y Corbin, J (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada, Universidad de Antioquía. Colombia

Taylor, P; Lopez, M; Passel, J y Motel, S (2011). Unauthorized Immigrants: Length of Residency, Patterns of Parenthood. En Internet disponible en: <https://pewrsr.ch/38lyV4T> Consultado el 27/10/2013

Valdez-Gardea, G (2011). La Antropología de la migración: Niños y jóvenes migrantes de la globalización. Hermosillo: El Colegio de Sonora - UAS. Primera Edición.

Verea, M (2014). The rise of anti-immigrant sentiments in the U.S.: Arizona and Alabama, emblematic cases. En: Elaine Levine y M. Vereá (coords.). *Impacts of the Recent Economic Crisis (2008-2009) on International Migration*. México. UNAM-CISAN.

Wasem, R (2011). Unauthorized Aliens' Access to Federal Benefits: Policy and Issues. Congressional Research Service. Disponible en: <https://bit.ly/3pXjYfb> Consultado el 12/10/2013

Páginas oficiales

American Immigration Council: <https://bit.ly/2LnYBES>

Data USA: <https://datausa.io/profile/geo/phoenix-az/>

Immigration Policy Center: <http://www.immigrationpolicy.org>

National Immigration Law Center: <https://www.nilc.org/>

Organización Internacional sobre las Migraciones: <https://bit.ly/38lv1Jf>

Pew Hispanic Center: <http://www.pewhispanic.org>

US. Census bureau: <http://www.census.gov/>



US Department Of Homeland Security. Secretary Napolitano Announces Deferred Action Process for Young People Who Are Low Enforcement Priorities. En: <https://bit.ly/2Lv9Yux>



Graves violações de direitos humanos contra camponeses e indígenas no Brasil.

Angelo Priori¹

Resumo

O objetivo deste *paper* é analisar os relatórios da Comissão Nacional da Verdade (CNV) e das Comissões Estaduais que ocorreram no Brasil durante os anos 2012 a 2017 para refletir sobre as graves violações de direitos humanos que indígenas, camponeses e trabalhadores rurais sofreram durante a ditadura militar (1964-1985). A expressão “violação de direitos humanos” adotada neste texto é a mesma consubstanciada pelos tratados internacionais, na qual foram consideradas aquelas que se caracterizam como “crimes de lesa humanidade”, de modo que trata especificamente das graves violações perpetradas por agentes do Estado Brasileiro e/ou a seu comando, contra a população civil, de maneira intensa e continuada, com uso permanente de força, suprimindo direitos individuais e coletivos, a liberdade de expressão e a imposição de um conjunto normativo autoritário para institucionalizar e legalizar atos e práticas típicas de regimes de exceção. Tomaremos como referência a violação de direitos contra indígenas, camponeses e trabalhadores rurais, para exemplificar as práticas cometidas pelo Estado autoritário brasileiro, no período acima referido.

Palavras chave

Direitos humanos; Violência; Repressão; Ditadura.

Introdução

Este *paper* tem como ponto de partida analisar algumas possibilidades de pesquisas sobre a questão das memórias obliteradas pelas políticas autoritárias e repressivas praticadas ao longo da ditadura militar brasileira (1964-1985). Para isto, utiliza-se de reflexões realizadas a partir das leituras dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade (CNV) e da Comissão Estadual da Verdade do Estado do Paraná (CEV), que reconheceram oficialmente, graves violações de direitos humanos, cometidos contra populações vulneráveis, por agentes do estado ou a seu mando.

Tanto a Comissão Nacional da Verdade, como as comissões estaduais, que foram organizadas nos diversos estados, foram frutos da organização e da luta travada pelas entidades da sociedade civil organizada, movimentos sociais, movimento sindical, movimento dos partidos políticos progressistas, movimentos estudantis, movimentos de



combate à tortura, grupo de busca por mortos e desaparecidos, grupos de combate às graves violações aos direitos humanos, entre tantos outros, que se mobilizaram para lutar pela criação da Comissão Nacional da Verdade - CNV.

No Paraná (Estado localizado ao sul do Brasil), por exemplo, mais de 60 entidades se reuniram no Fórum Paranaense de Resgate de Verdade, Memória e Justiça, para incentivar a criação da Comissão Estadual da Verdade do Estado. Na lógica de organizar os trabalhos de coleta de documentos, oitivas e depoimentos, tanto a CNV como a CEV/PR constituíram, para seu melhor funcionamento, diversos grupos de trabalho, dentre os quais o Grupo de Trabalho sobre Graves Violações de Direitos Humanos contra povos indígenas e camponeses. Esses grupos de trabalho fortaleciam a ideia e a constatação de que os maiores atingidos pelo Golpe Civil Militar instalado no Brasil em 01 de abril de 1964 - além dos trabalhadores urbanos e militantes políticos - foram as mulheres, os camponeses, os trabalhadores rurais e os povos indígenas.

A expressão “violação de direitos humanos”, aqui empregada, tem o mesmo sentido daquela consubstanciada pelos tratados internacionais, na qual são consideradas aquelas que se caracterizam como “crimes contra a humanidade” (Silva Filho, 2012, p. 49). Mais especificamente, trata-se das graves violações perpetradas por agentes do Estado Brasileiro e/ou a seu comando, contra a população civil, de maneira intensa e continuada, durante a ditadura militar. Durante a Ditadura Militar (mas também em outros períodos da história brasileira), foi muito comum o uso permanente da força, a supressão dos direitos individuais e coletivos, da liberdade de expressão e a imposição de um conjunto normativo autoritário que visava institucionalizar e legalizar atos e práticas típicas de regimes de exceção, sob a égide da prisão arbitrária, da suspensão do *habeas corpus*, da incomunicabilidade dos presos, da tortura, da violência sexual e da condenação sem provas reais, a partir de um sistema paralelo de combate aos opositores do regime baseado na obtenção de confissões e produção de provas forjadas sob tortura, no sequestro e desaparecimento forçado e na pena capital, via de regra executadas à margem do sistema legal e de maneira clandestina e transladadas para o sistema normativo oficial (Greco, 2003; Alves, 2005).

Graves violações de direitos no campo (camponeses e indígenas)

Foi por considerar que as graves violências sofridas por camponeses e trabalhadores rurais, no Brasil e no Estado do Paraná, enquadram-se no conceito jurídico de “graves violações de direitos humanos”, que tanto a CNV como a CEV/PR incluíram em seus relatórios finais das duas comissões, pontos importantes sobre o tema.



Importante frisar que no âmbito da Comissão Nacional da Verdade (mas trabalhando paralela e colaborativamente), existiu a Comissão Camponesa da Verdade – CCV (2014), que também fez um trabalho grandioso e produziu um longo relatório sobre o assunto (451 páginas). Parte deste relatório foi inserida no relatório final da própria CNV (2014), sendo que os camponeses, trabalhadores rurais e indígenas não foram relegados ao esquecimento, como se temia (Saraiva & Sauer, 2014, p. 9). No volume 1 do relatório da CNV existem anotações de 3 casos emblemáticos: o massacre de Ipatinga/Usiminas; Trombas e Formoso e sobre a Operação Mesopotâmia, que ocorreu nas divisas dos Estados do Maranhão e Goiás em 1971. No volume II, dedicado aos chamados “textos temáticos”, há um texto exclusivo sobre camponeses, formado por aproximadamente 62 páginas, que apontam diversos temas relacionados à violência no campo e contra os povos da Floresta. No volume II, também há um texto de 60 páginas, dedicado às graves violências contra os povos indígenas, que demonstram uma diversidade de projetos levado a cabo pelo Estado e por empresas colonizadoras, agropecuárias, extrativistas e mineradoras, que solaparam as terras indígenas, a cultura e os modos de vida de milhares de homens e mulheres que viviam na floresta.

Aqui, contra camponeses e indígenas mais uma vez a tortura é recorrente. Citarei apenas alguns casos, ocorridos na região norte do Estado de Goiás, atual Estado de Tocantins, onde ocorreu a Guerrilha do Araguaia².

Para os moradores mais antigos da região do Araguaia, a experiência da guerrilha teve início com a chegada dos primeiros militantes comunistas (os chamados “paulistas”), no ano de 1966, e com a instalação sucessiva de grandes contingentes militares, a partir de 1970. Até aquele momento, a convivência entre os moradores da região e os militantes do PCdoB poderia ser considerada pacífica e amistosa. Mas, sobretudo a partir de 1972, com os primeiros combates entre guerrilheiros e militares, o cenário mudou. A partir deste ano, os camponeses “passaram progressivamente a integrar as listas de vítimas das violações cometidas pelos agentes do Estado brasileiro” (Comissão Nacional da Verdade, 1, 2014, p. 699).

Somente na operação Marajoara (colocada em prática no mês de outubro de 1973), foram 161 camponeses presos e torturados (e outros 42 listados para serem presos), incriminados de atuar numa rede de apoio aos guerrilheiros (Comissão Nacional da Verdade, 1, 2014, p. 701).

Muitas vezes, após longas seções de tortura, havia também os assassinatos. É o caso do camponês Lourival de Moura Paulino, que às vezes prestava os serviços de



barqueiro para os guerrilheiros. Lourival de Moura Paulino foi preso em 18 de maio de 1972. Foi torturado durante os dias que permaneceu na delegacia de Xambioá, com a participação do delegado e de militares do Exército e, depois, no dia 21 de maio de 1972, foi encontrado enforcado em uma cela (Comissão Nacional da Verdade, 3, 2014, p. 942).

Nos relatos dos moradores da região do Araguaia, e em várias fontes, percebe-se que além da violência física, o Estado brasileiro recorreu também à privação dos meios de sobrevivência de parte da população. Queimavam suas plantações, proibiam o retorno temporário às suas terras ou, até mesmo, os expulsavam definitivamente. As violações comprometiam de maneira direta a subsistência das famílias, mas, também, ameaçavam a existência da comunidade, uma vez que interferiam com, ou até mesmo rompiam, os pressupostos básicos que selavam os laços que a constituíam (Comissão Nacional da Verdade, 1, 2014, p. 702). É o mesmo ritual que aconteceu em outros conflitos camponeses importantes do Brasil, como nas revoltas camponesas de Porecatu, no norte do Estado do Paraná (Priori, 2012) ou de Trombas e Formoso, no norte do Estado de Goiás (Cunha, 2007).

O mesmo *modus operandi* utilizado com os camponeses foi replicado em relação aos Aikewara, povo indígena do Estado do Pará, braço da etnia Surui, que até hoje vive na região. Os Suruis também organizaram uma Comissão da Verdade para apresentar à sociedade os ataques que sofreram durante a Ditadura Militar (Garcia, 2014). Quando o exército chegou na região, os Aikewara foram mantidos cativos em sua própria aldeia e submetidos às mesmas privações e torturas impostas aos camponeses, tanto no que diz respeito aos indivíduos como no que se refere à coletividade. Os homens foram obrigados, sob coerção, a servir de guias para as tropas do Exército, enquanto suas esposas permaneciam cativas dos soldados na aldeia (Comissão Nacional da Verdade, 1, 2014, p. 703-704). O resultado disso foi que algumas mulheres, devido ao estresse da situação, sofreram abortos e outras perderam filhos nascidos prematuramente.

Como grupo, os indígenas tiveram sua aldeia e reservas de alimento queimadas e os poucos homens que puderam permanecer na aldeia foram impedidos de sair para caçar, pescar, coletar ou trabalhar no roçado. Assim, sofreram não somente a fome e a falta de abrigo imediato, como também foram privados tanto da manutenção de sua subsistência como dos elementos materiais de sua cultura, situação que colocou aquela comunidade sob risco de diminuição e desagregação.



No livro organizado por Gilney Viana (2013) - *Camponeses mortos e desaparecidos: excluídos da justiça de transição* - foram listados 1161 mortos e desaparecidos no campo entre 1961 e 1988. Esta quantidade de assassinatos e de graves violações aumenta consideravelmente quando incluímos os números relativos aos índios exterminados no processo de expansão e ocupação do interior do Brasil, levada a cabo durante a ditadura militar. Devo enfatizar que o Estado não pode ser isento desta responsabilidade pública e cuja ponta do iceberg está na produção do chamado Relatório Figueiredo (1968), documento que reporta a violência extrema contra indígenas, como os casos de tortura, de confinamentos, de trabalho escravo e de assassinatos.

Os parâmetros teóricos dos trabalhos da CNV e das Comissões Estaduais

Tanto a CNV como a CCV e as Comissões Estaduais da Verdade trabalharam com dois parâmetros teóricos. O primeiro é sobre a concepção política de que o Estado é um sujeito de violações de direitos. Os depoimentos recolhidos e os debates e oitivas realizados colocaram em evidência as especificidades da questão camponesa. Foi necessário considerar, na atuação do Estado, não apenas aqueles casos e ações em que agentes estatais agiram como atores diretos, mas também situações de omissão, conluio, acobertamento ou mesmo a “privatização da ação do Estado”, em que o latifúndio funcionou como um braço privado, antes, durante e depois da ditadura civil-militar de 1964. Um dos desafios, portanto, foi o de formular critérios que dariam condições de entender onde a ação, a omissão e/ou a conivência do Estado se associaram com violações de direitos sofridas por camponesas e camponesas, a fim de evitar que o passado se repita (Comissão Estadual da Verdade do Paraná, 2017).

O segundo parâmetro que foi norteador refere-se à noção de memória e à importância atual da memória camponesa. A reconstrução dessa memória é fundamental para quebrar a invisibilidade política produzida sobre esses atores sociais, como também para fortalecer a inserção dos camponeses no debate público sobre a ditadura civil-militar, inclusive como sujeitos da resistência. Desse modo, as Comissões da Verdade reuniram trajetórias de camponeses e trabalhadores rurais no percurso da resistência em todas as regiões do Estado³.

E aqui algumas palavras sobre o processo de invisibilidade. É fundamental ter claro que, apesar dos processos históricos de luta por direitos e resistência à expropriação, há uma clara invisibilidade histórica dos camponeses, tanto em relação ao seu protagonismo (na luta contra a violência do latifúndio ou da ditadura) como nos



processos de reparação. É um segmento social “esquecido” (poucos casos investigados nas Comissões de Anistia e de Mortos e Desaparecidos, por exemplo), tanto por seu protagonismo e luta como pela não reparação das violações sofridas.⁴

A invisibilidade (alguns preferem invisibilização) serve como um mecanismo político de não reconhecimento e, conseqüentemente, não reparação (pequeno número de casos aprovados) e o que é mais grave, não justiça (raros casos de punição judicial aos perpetradores das violações aos direitos humanos, no campo), sendo fundamental este trabalho de reconstrução da memória e da verdade.⁵

Como se fazer valer da memória camponesa para justificar o acesso à justiça, quando sabemos que a realidade de violência, repressão, retaliação, perseguição e massacres sofridos por homens e mulheres no campo não está devidamente registrada nos documentos oficiais? No caso aqui, os relatos de experiência podem ser profícuos, como os depoimentos colhidos pelas diversas comissões da verdade. Como enfatiza J. W. Scott (1998) “histórias que documentam o mundo escondido (...) mostram o impacto do silêncio e repressão nas vidas que foram afetadas e trazem à luz a história de como foram suprimidos e explorados” (p. 302).

Ao tratar da memória camponesa e dos trabalhadores rurais, mas também dos povos indígenas, compreendemos que a memória é parte da construção da verdade. Sem trazer à tona memórias daqueles que foram duramente atingidos, em períodos repressivos, a verdade, o acesso à justiça e a reparação seriam limitados. Temos clareza que ambas, memória e verdade, são elementos fundamentais para a reparação do direito humano de tantos camponeses e indígenas atingidos. Se reconhecermos que as lutas camponesas foram parte da resistência à repressão, antes ou durante a ditadura civil-militar, será possível – além de reconhecer o protagonismo pretérito desses sujeitos – iniciar um justo processo de reparação das violações sofridas pelos mesmos, aproximando memória e justiça. Essa aproximação não esvazia a relação entre memória e passado, mas a vincula a uma construção do porvir de maneira concreta, dando respostas às situações de violação de direitos humanos sofridas por camponeses e trabalhadores rurais.⁶

Na luta camponesa por direitos e contra o latifúndio e a propriedade privada, figuram ações de milícias privadas, jagunços, pistoleiros, e outros, em violências reiteradamente marcadas como crimes comuns. Entretanto, poucos são investigados os agentes do Estado que participaram ativamente de ações repressoras, por conivência ou omissão, dos crimes cometidos no campo. Tampouco é aprofundado o impacto das políticas



públicas que se abateu contra a população rural no período, sobretudo as políticas de colonização e modernização conservadora do campo, que expulsou milhões de pessoas para as cidades, mudando todo o seu ambiente sócio-cultural. Falar em memória e verdade no campo deve abrir a possibilidade de reescrever um capítulo da história brasileira e reconhecer e responsabilizar agentes do Estado por violações de direitos, cometidos no abuso de suas competências.

Entre os crimes cometidos contra camponeses no período da ditadura, as torturas, mortes/assassinatos, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres são mais facilmente identificadas como graves violações de direitos humanos. Entretanto, é necessário abrir o escopo, incluindo a violência entendida como ameaças, perseguições, expulsão da terra, prisões arbitrárias e outras ações contra pessoas e grupos no campo.

A memória não deve se limitar a cumprir um compromisso com as vítimas da repressão, senão servir também para construir um futuro que, a partir do recordar, logre sanar e superar a herança perversa do autoritarismo. Por isso, não é possível abrir mão de instrumentos de justiça, portanto, é fundamental que a responsabilidade do Estado e de seus agentes sejam reconhecidas pelas violações e danos causados à vida de tantos camponeses e as injustiças sejam reparadas. O sentido da memória – apreendida como perspectiva de futuro pautado em valores democráticos ampliados – está ancorada na sua compreensão como uma recordação limpa, coesa e ampliadora da verdade. Assim, a sociedade brasileira guarda os mesmos sentidos para o passado e o mesmo encaminhamento para o futuro, como garantia da justiça.

Tanto na conjuntura que antecedeu ao golpe militar - entre 1946 e 1964 - o regime democrático não assegurava os direitos de cidadania aos camponeses e reprimia suas lutas e organizações, como entre 1964 e 1985, a ditadura civil-militar suprimiu as liberdades democráticas de camponeses que foram perseguidos, agredidos, torturados e mortos.

Reflexões finais

Para finalizar, quero destacar que as violações de direitos contra os povos indígenas, camponeses, trabalhadores rurais foram incluídas nos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Camponesa da Verdade e nas Comissões estaduais, visando ampliar o entendimento da sociedade sobre a abrangência da ação de um Estado repressor na vida dos cidadãos. Prisões, torturas, maus-tratos, assassinatos e desaparecimentos forçados aconteceram contra todos os segmentos atingidos pela



violência do Estado no período entre 1964 e 1988, mesmo aqueles em que os enfrentamentos se deram por motivações políticas, contextos e formas de resistência distintos das situações vividas pelas organizações de esquerda urbanas e rurais.

Denúncias surgiram nos depoimentos prestados em audiências públicas e visitas aos camponeses, trabalhadores rurais e povos indígenas atingidos, bem como em documentos produzidos pelo próprio Estado nos períodos do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e da Fundação Nacional do Índio (Funai), e também nos relatórios de casos sistematizados e enviados ao grupo de trabalho pela sociedade civil.

Devido a pouca sistematização sobre esse tipo de violações contra camponeses, trabalhadores rurais e indígenas no Brasil, coube à Comissão Nacional da Verdade e às Comissões Estaduais da Verdade trazer o assunto à luz do dia e apontar à sociedade que os índios e os camponeses no Brasil também foram atingidos pela violência do Estado. Esta investigação precisa de continuidade para que esses povos participem e sejam beneficiados pelo processo de justiça transicional em desenvolvimento no Brasil.

Reconstruir a memória camponesa e indígena abre a possibilidade de dar visibilidade pública às violações cometidas pelo Estado e seus agentes contra homens e mulheres do campo, violentados por lutarem pelo direito à terra, resistir ao avanço de uma modernização (excludente e dolorosa) e marcados pela usurpação de direitos.

Notas

¹ Doutor em História. Professor do Departamento e do Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá/Paraná, Brasil.

Contato: angelopriori@uem.br

² A guerrilha do Araguaia foi um movimento guerrilheiro, de combate e resistência contra a Ditadura Militar, que ocorreu no final da década de 1960 e início da década de 1970, organizado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), na região amazônica brasileira, ao longo do leito do rio Araguaia. O objetivo era derrocar a ditadura militar e fomentar uma revolução socialista, a partir do campo (Studart, 2006).

³ Para refletir sobre a história do Brasil recente, na perspectiva da memória dos camponeses e dos trabalhadores rurais, destacando as suas conquistas, as suas derrotas e as suas dificuldades de acesso ou permanência à terra, bem como destacar um olhar mais atento para as vítimas do passado que ficaram no meio do caminho, presentificar as suas ausências e combater o seu esquecimento, sugiro as considerações de Paul Ricouer (2008) e de Araújo & Santos (2007).



⁴ É importante destacar que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil, até o governo anterior, vinha envidando esforços para a visibilidade dos mortos e desaparecidos do campo. Dois exemplos foram as publicações dos seguintes livros: *Camponeses mortos e desaparecidos: excluídos da justiça de transição* (2010) e *Retratos da repressão política no campo – Brasil: 1962-1985* (2013). Infelizmente, no atual governo autoritário de Jair Bolsonaro, tanto a Secretaria dos Direitos Humanos foi desativada como a Comissão dos Mortos e Desaparecidos foi totalmente descaracterizada.

⁵ No livro *O levante dos posseiros* (2012) analisei a dificuldade que os camponeses e trabalhadores rurais tem de acessar a justiça brasileira.

⁶ Sobre a questão da reparação, tanto “moral como histórica”, um bom debate encontra-se em Glenda Mezarobba (2007). Para uma leitura no campo do direito, ver Abrão & Torelly (2010).

Referências bibliográficas

Abrão, P. & Torelly, M. D. (2010). Justiça de transição no Brasil: a dimensão da reparação. In: *Repressão e memória política no contexto Ibero-Brasileiro: estudos sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal* (27-59). Brasília, Brasil: Ministério da Justiça/Comissão da Anistia; Coimbra, Portugal: Universidade de Coimbra/Centro de Estudos Sociais.

Alves, M. H. M. (2005). *Estado e oposição no Brasil (1964-1984)*. (2ª. Ed). Bauru, Brasil: Edusc.

Araújo, M. P. N. & Santos, M. S. (2007). História, memória e esquecimento: implicações políticas. *Revista crítica de Ciências Sociais*, 79, 95-111.

Brasil. (2011). Lei 12.598 que institui a Comissão Nacional da Verdade. *Diário Oficial da União*. Brasília, Brasil, 12 de novembro.

Comissão Camponesa da Verdade. (2014). *Relatório final. Violação de direitos no campo (1946 a 1988)*. Brasília, Brasil: CCV.

Comissão Estadual da Verdade do Paraná. (2017). *Relatório da Comissão Estadual da Verdade – PR – Teresa Urban*. Curitiba, Brasil: Secretaria de Estado da Justiça.

Comissão Nacional da Verdade. (2014). *Relatório (volumes I, II e III)*. Brasília, Brasil: CNV.

Cunha, P. R. (2007). *Aconteceu longe demais: a luta pela terra dos posseiros de Formoso e Trombas e a revolução brasileira (1950-1964)*. São Paulo, Brasil: Ed. Unesp.



- Garcia, A. P. (2014). Comissão da Verdade Suruí-Aikewára: uma etnografia da memória e do esquecimento. 29^a. *Reunião Brasileira de Antropologia*. Natal, Brasil: ABA.
- Greco, H. A. (2003). *Dimensões fundacionais da luta pela anistia*. Tese de doutoramento em História. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
- Mezarobba, G. (2007). *O preço do esquecimento: as reparações pagas às vítimas do regime militar*. Tese de doutoramento em Ciência Política. Universidade de São Paulo, Brasil.
- Priori, A. (2012). *O levante dos posseiros: a revolta camponesa de Porecatu e a ação do PCB no campo*. Maringá, Brasil: Eduem.
- Relatório Figueiredo. (1968). 30 volumes. Acessado em 15 de agosto de 2019 em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo>.
- Ricouer, P. (2008). *A memória, a história e o esquecimento*. Campinas, Brasil: Ed. Unicamp.
- Saraiva, R. C. F. & Sauer, S. (2014). *Memória camponesa e a presentificação do passado: notas sobre a comissão camponesa da verdade*. Rio de Janeiro, Brasil: Rede de estudos rurais.. Acessado em 06 de setembro de 2015 em: <https://bit.ly/3s1tHD1>
- Scott, J. W. (1998). A invisibilidade da experiência. *Projeto História*, 16, 297- 325.
- Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. & Ministério do Desenvolvimento Agrário. (2010). *Retratos da repressão política no Campo (Brasil: 1962-1985): camponeses torturados, mortos e desaparecidos*. Brasília, Brasil: SDH/MDA.
- Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. (2013). *Camponeses mortos e desaparecidos: excluídos da justiça de transição*. Brasília, Brasil: SDH.
- Silva Filho, J. C. M. (2012). Crimes do Estado e justiça de transição. In: R. Gauer & R. M. Chittó (org.). *Criminologia e sistemas jurídico-penais contemporâneos* (45-68). (2^a ed). Porto Alegre: Ed. Pucrs.
- Studart, H. (2006). *A lei da selva: estratégias, imaginário e discurso dos militares sobre a guerrilha do Araguaia*. São Paulo, Brasil: Geração Editorial.
- Viana, G. A. (coord.). (2013). *Camponeses mortos e desaparecidos: excluídos da justiça de transição*. Brasília, Brasil: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.



Os 50 anos do maio de 1968 e seus reflexos no Brasil: uma análise da corbetura midiática

Lucas Barbosa Branco
Marcus Vinícius Costa da Conceição

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo analisar o modo como o jornal O Estado de São Paulo e o portal de notícias UOL abordaram de diferentes formas o cinquentenário, em 2018, dos eventos que ocorreram na França entre os meses de Maio-Junho de 1968. Perceber como cada um desses meios de difusão do conhecimento trabalham de maneira distintas esses acontecimentos, buscando assim trazer uma especificidade ao seu público leitor é fundamental para perceber o modo como em um país como o Brasil, esses eventos ainda têm um impacto significativo. Um elemento central nos estudos sobre a chamada grande imprensa é perceber que ela tende a se passar como neutra, quando, na verdade acaba assumindo determinadas posturas diante dos fenômenos sociais, como demonstra Penna (2007). Uma das maiores contribuições a que se refere ao estudo das mídias, são as contribuições da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer (1996). Isto nos remete ao processo social de produção do discurso dos meios de comunicação, buscando reconstituir as determinações do discurso ali produzido, buscando perceber desse modo como são costuradas as tramas do tecido jornalístico.

As mídias deram uma importância grande ao cinquentenário do evento, buscando retratar de maneira geral o que ocorreu. As reportagens possuem um tom descrito em que não buscam, salvo raras exceções, fazer uma análise e reflexão sobre os acontecimentos e seus impactos.

Palavras chave

Maio de 1968; Imprensa; UOL; Estado de São Paulo; Cinquentenário.

Introdução

Em 2018, o Maio de 1968 comemorou 50 anos. Os eventos que atingiram a França em cheio, e especialmente Paris, causando uma greve de 10 milhões de trabalhadores por quase duas semanas é um tema que sempre volta a discussão sobre os seus impactos e consequências tanto na França como no mundo todo.



Em 2018 esse papel foi de maior destaque ainda. O cinquentenário daquelas manifestações trouxe novas inquietações, um novo olhar e uma preocupação maior em explorar o que realmente foram aqueles eventos e de que maneira o mundo os percebeu tantos anos depois.

Para compreender quais os impactos desses acontecimentos na contemporaneidade, o presente artigo visa a análise de dois objetos que são fundamentais na disseminação de ideias e informações no mundo contemporâneo: o jornal e o site de notícias e variedades. Para isso, escolheu-se trabalhar com o jornal *O Estado de São Paulo*, um dos três jornais de maior circulação no Brasil; o site de notícias *UOL*, o maior e um dos mais antigos portais de notícias do país.

A escolha desses dois suportes serve como elemento de se perceber como nos diferentes meios de difusão, tem-se uma visão específica voltada para cada público, ou seja, a forma de abordar e de realizar a transmissão do conteúdo é diferenciada. Desse modo, consegue-se definir melhor a linha de atuação, o que pretende-se passar com o viés escolhido pela linha editorial e também quais os públicos que terão acesso aquelas análises.

As publicações sobre o Maio de 1968 vem aumentando gradativamente ano a ano, sendo que em 2008, quando ocorreram os 40 anos das manifestações, verificou-se uma enxurrada de livros e artigos no mercado editorial tanto francês quanto brasileiro, analisando aqueles acontecimentos, sendo que somente na primavera de 2008 na França foram publicados cerca de 60 livros sobre os eventos de 1968. Além disso, jornais, revistas e periódicos acadêmicos lançaram uma série de números especiais e matérias discutindo os mais variados aspectos desse movimento, desde a parte estudantil, passando pela cultura, social, política, econômica e simbólica.

A disputa em torno da memória do que foi o Maio é muito forte, especialmente nesse ano de 2018. Erick Corrêa exemplifica bem o que se coloca como discurso em torno da ideia do que foi o Maio:

os filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari (1984), de que o Maio de 68 não aconteceu, deve ser entendida: pois, se a luta não começou nas barricadas dos dias 10 e 11 de maio, tampouco ela terminou com as eleições de 23 e 30 de junho, mas se desenvolveu posteriormente também nas trincheiras do campo simbólico, isto é, nos conflitos ideológicos pela memória do evento. (Corrêa, 2018).



Essa disputa pode ser sentida sobretudo na imprensa e no mercado editorial, onde costuma-se a apresentar as diferentes opiniões acerca dos eventos ali retratados. Um elemento central nos estudos sobre a chamada grande imprensa é perceber que ela tende a se passar como neutra, quando, na verdade acaba assumindo determinadas posturas diante dos fenômenos sociais.

Sobre a diferença entre a imprensa de opinião e a imprensa de informação, a elucidação de Lincoln Penna (2007) é expressiva para demonstrar como o discurso da grande mídia é enganoso no que se refere a uma suposta neutralidade nos seus veículos. Penna demonstra que do início da imprensa e até o início do século XX, todo jornal era inevitavelmente de opinião, somente com o desenhar das grandes corporações midiáticas, este discurso como a mudar.

Materiais e Métodos

Olgária Matos (1981) foi responsável pelo processo de compreensão do que foi o Maio e de como ele se estruturou dentro da sociedade e dos grupos políticos na França.

A historiadora Tânia Regina de Luca (2006) demonstrou como a utilização da imprensa como fonte para a pesquisa histórica é extremamente recente, por volta da década de 1960, e resultado das transformações pelas quais a historiografia daqueles anos passou (a história nova, a nova historiografia marxista britânica). Conseqüentemente, a metodologia de análise de jornais vem sendo construída paulatinamente, especialmente com a ajuda de outras do conhecimento, de modo a abordar toda a complexidade na qual ela está inserida.

Uma das maiores contribuições a que se refere ao estudo das mídias, são as contribuições da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer (1996). Através do conceito de indústria cultural, avançou-se na percepção de que aquela é uma produtora de mercadorias, perfazendo assim a noção de que a notícia não expressa necessariamente a verdade, mas sim é criada para um determinado fim.

Isto nos remete ao processo social de produção do discurso dos meios de comunicação, buscando reconstituir as determinações do discurso ali produzido, buscando perceber desse modo como são costuradas as tramas do tecido jornalístico.

Após a contextualização foi realizada a catalogação e análise das publicações do acervo do Jornal online *O Estadão* que trouxe várias matérias, tanto em seu acervo quanto em seus blogs jornalísticos. que trouxe diversas matérias analisando e comemorando (mesmo que de forma bem cética) os 50 anos do maio de 68 como forma de entender



o contexto e as consequências na atual sociedade. Foram catalogadas 8 reportagens do jornal *O Estadão* publicadas entre os meses de março e junho sobre os acontecimentos.

A matéria "*Protagonistas das barricadas de 68 revisam legado*" traz uma análise mostrando que o maio de 68 se ergueu na França principalmente contra o regime patriarcal da época, porém mesmo neste contexto a matéria cita o movimento como "Bem sucedido no setor cultural, mas fracassado em ideais políticos", na mesma página o autor ainda escreve; "Um movimento pluralista sem mulheres na liderança" e explica que o despertar do problema da desigualdade de gênero só começou após o maio de 68 (visto que o movimento era contra a sociedade patriarcal e a favor da liberdade de expressão), trazendo a imagem de uma jovem estudante em frente às manifestações, o que acabou por lembrar muito a obra "A liberdade guiando o povo" de *Delacroix*, assim a fotografia de Jean-Pierre Rey ficou conhecida como "*Marianne de 68*" (Marianne é um dos grandes símbolos da revolução francesa). Já a matéria "*Não resta nada de Maio de 1968*" publicada em 13 de Maio de 2018, traz em seu título uma interpretação própria de uma entrevista realizada com um dos grandes líderes da revolução, uma vez que o autor diz que "*compará-la aos movimentos de hoje é inútil e anacrônico*" lendo a entrevista se conclui na verdade que o que foi dito pelo referente líder é que, "*Os eventos de hoje não têm mais nada a ver com os de 1968*".

Foi necessário fazer uma adaptação ao projeto, aprovado pelo orientador. Devido a extensão das análises, focou-se apenas nas matérias publicadas no jornal *O Estado de São Paulo*, deixando de lado as que foram produzidas pelo site UOL, uma vez que muitas compreendiam também as realizadas pelo Jornal *Folha de São Paulo*, pois são do mesmo grupo.

Nas análises sobre o mercado editorial, levantou-se que foram publicadas ao menos 5 obras e algumas outras reimpressões, buscando celebrar os 50 anos dessas manifestações. Esse número é bem menor do que apresentando no ano de 2008, cerca de 10 obras de conhecimento amplo, e não expressa a importância do tema frente aos debates contemporâneos sobre os movimentos sociais. No decorrer do projeto, buscou-se somente analisar a obra *Maio de 68 – A brecha*, uma vez que das que foram elencadas no projeto, era a única que possuía um perfil analítico e não de reconstrução histórica dos acontecimentos.



Resultados e Discussão

Destaca-se entre as reportagens, a série especial realizada pelo professor Rodrigo Lemos em 5 partes, que buscam criar um panorama e o impacto que o ano de 1968 causou no mundo. Dentre essas análises, se destaca a segunda em que busca demonstrar como a visão 50 anos depois é um processo que vai além da mera revolta contra o capitalismo, mas sim ajudou a moldar os processos sociais que viriam posteriores a ele, como ele coloca “É por fenômenos assim, que o maio de 68 não se restringiu a uma mera crítica à sociedade industrial e capitalista, mas foi também, sem que seus participantes se dessem conta, seu acelerador” (Lemos, 2018).

Outra reportagem interessante e que diz muito da herança do Maio, é a publicada no dia 13 de maio de 2018, intitulada *Não resta nada do Maio de 1968*. Nela, Daniel Cohn-Bendit considerado um dos líderes de 68 responde a uma entrevista buscando responder o que ele via de manutenção de 68 na sociedade hoje. A sua resposta é surpreendente, pois para ele as marcas de maio 68 hoje são nulas, uma vez que as condições e os movimentos hoje acontecem por causas distintas. Essa posição, contrasta com a de autores como Corrêa e Mhereb (2018) que veem não só uma influência, mas uma inspiração do maio a movimentos sociais contemporâneos.

O maio de 1968 nas ruas de Paris, foi marcado por manifestações e revoltas que marcaram uma sociedade, o poder e o mundo. Manifestações com um caráter moral mostrava a revolta de estudantes de universidades e posteriormente da classe operária da época, nesse mesmo período outras partes do mundo também vivenciavam a mesma situação e que eclodiram com o incentivo das manifestações dos jovens em Paris. Os jovens com o espírito da revolta foram capazes de manifestações bem-sucedidas, apoio de maiorias e comoção total de uma sociedade, mostrando assim quais as ações necessárias para se chegar em uma revolução e seus resultados finais.

O que torna o maio de 68 tão importante historicamente é força que estudantes tão jovens e minorias puderam carregar ao parar o estado através de uma organização e objetivos claros, posteriormente causando impactos em vários âmbitos sociais e nos mostrando até os dias de hoje que o poder não necessariamente é monopolizado pelo governo.

Conclusão

Todo o movimento conquistou ao fim de toda as manifestações seus objetivos principais de autonomia às universidades e fragilização de um governo que se mostrava irreduzível. Conclui-se então que um evento como o maio de 1968 é capaz de modificar



estruturas sociais e trazer à tona questionamentos sobre o real poder de um governo mesmo diante de toda a autoridade de uma ditadura, e a força que possui as classes que movimentam o governo como a classe trabalhadora e a estudantil. Outra conclusão apresentada é que o poder de um Estado não necessariamente se baseia somente na estabilidade econômica e de poder militar, mas também na satisfação de todas as classes.

Perceber essas posições, aliadas a visão sobre as análises colocadas no Brasil nos 50 anos desses acontecimentos, percebe-se que apesar das diferentes posturas sobre o legado do Maio de 68, mas em geral a postura de negação da importância desses eventos, ele ainda consegue gerar debates e influências, principalmente nas mídias.

Referências Bibliográficas

Jornal O Estado de São Paulo. *Acervo Estadão on-line*. Disponível em: www.acervo.estadao.com.br. Acesso em: Fevereiro de 2019.

Blog O Estado de São Paulo. *Acervo Estadão on-line*. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs>. Acesso em: Fevereiro de 2019.

Lemos, Rodrigo de. 50 anos de maio de 68 – Parte 2: Contra a palavra do mestre. O Estado de São Paulo, 14 de abril de 2018.

Matos, Olgária C.F. Paris 1968: As barricadas do desejo. São Paulo: Brasiliense, 1981.

Morin; Lefort; Castoriadis. Maio de 68: A brecha. São Paulo: Autonomia Literária, 2018.



Desaparición de personas en México: La acción colectiva frente al Estado en la búsqueda de la verdad.

María Teresa Villarreal Martínez

Resumen

Este trabajo examina el repertorio de movilizaciones de familiares de personas desaparecidas en México como una estrategia de exigencia de cuentas para ejercer el derecho a la verdad, en particular el caso de Nuevo León. También se revisa el trabajo de investigación desarrollado por funcionarios ministeriales de esa entidad federativa y se valora su aporte al esclarecimiento de los hechos con base en la información pública sobre la atención de denuncias. El análisis se realiza desde la perspectiva de los derechos humanos, considerando el derecho a la verdad como parte integral del acceso a la justicia que requiere de procesos investigativos eficaces y oportunos, así como la participación de las víctimas y sus familiares, pues solo así puede haber una rendición de cuentas que abone a la recuperación de la sustentabilidad social y política en México. Para recabar información sobre las movilizaciones de colectivos de familiares de víctimas se recurrió a la investigación documental –hemerográfica y de comunicados publicados en sitios de internet de los colectivos-; para abordar la acción estatal se recurrió a examinar la información pública disponible y solicitar datos complementarios mediante el mecanismo de transparencia. La perspectiva de derechos humanos, en especial lo referente al derecho a la verdad, proporcionó los parámetros de análisis.

Palabras clave

Desapariciones; Derecho a la verdad; Víctimas.

Introducción

Cuando la desaparición de personas es un problema que afecta a miles de personas en determinado periodo y se convierte en un agravio generalizado y sistemático hacia la población, ya sea que ocurra con la participación directa del Estado o simplemente con su tolerancia, puede llegar a considerarse un delito de lesa humanidad. Esta problemática genera el deterioro generalizado de los derechos civiles, y así no es posible la existencia de ciudadanos; sin estos últimos, hablar de democracia se convierte en una ficción. No hay ciudadanos ni democracia, porque la desaparición de miles de personas frustra las capacidades más elementales de los individuos y la población para vivir y también para emprender proyectos vitales.



La situación se agrava con la impunidad persistente, atribuible no solo a la posible complicidad entre autoridades y delincuencia sino sobre todo a la falta de capacidades institucionales para reconocer el problema, llevar a cabo investigaciones eficientes, sancionar a los responsables y reparar los daños infligidos a las víctimas. La importancia de destacar este aspecto se relaciona con las obligaciones del Estado mexicano en el marco de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, referentes a respetar, proteger y hacer efectivo el goce de los derechos fundamentales para las personas que se encuentran en su territorio (OACNUDH, 2006).

Este trabajo reflexiona sobre la vinculación entre democracia y la lucha por los derechos a la verdad y la memoria. Se examina tanto la demanda de justicia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Nuevo León, como las respuestas estatales ante el problema. Este análisis se realiza a la luz del derecho a la verdad, partiendo de los planteamientos que sobre este tema se han vertido en distintos instrumentos de derechos humanos. Sin verdad, no hay justicia ni Estado de derecho, por lo que la sostenibilidad de la democracia está en riesgo.

Dentro de esta perspectiva destacamos el principio de la rendición de cuentas que, en el caso de graves violaciones a derechos humanos, tiene como centro la garantía de tres derechos interconectados: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación (Pillay, 2012). La rendición de cuentas es la clave para recuperar la confianza social en la justicia y restablecer el Estado de Derecho. Pero para que sea eficiente y sostenible requiere del involucramiento del gobierno con voluntad política y reconociéndose como titular de obligaciones por un lado, y por otro, de la sociedad civil, en especial las personas titulares de derechos que han sido afectadas, con capacidad para demandar explicaciones y sanciones.

Para la obtención de información recurrimos a la revisión hemerográfica por internet, *blogs*, perfiles de *facebook* y sitios oficiales de estos grupos, de documentos e informes de organismos de derechos humanos y de autoridades gubernamentales en relación con la atención al problema de la desaparición de personas, así como la observación directa de algunas acciones emprendidas por familiares de personas desaparecidas.

Derecho a la verdad y democracia

Ante graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de la desaparición de personas, el establecimiento de responsabilidades se relaciona con el ejercicio de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, considerados éstos no separadamente sino de manera interrelacionada.



En cuanto a la desaparición de personas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha señalado que los Estados deben rendir cuentas sobre el cumplimiento de las siguientes responsabilidades (CIDH, 2014: 30):

- Realizar de oficio una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas a fin establecer la verdad de lo sucedido.
- Investigar y sancionar a los responsables.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece que los Estados Partes se comprometen, entre otras cosas, a:

- Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo – artículo 1.

En tanto que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señala entre los compromisos de los Estados:

- adoptar todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos – artículo 24
- Garantizar el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas – artículo 24.

Estas obligaciones también aplican en los casos de desapariciones realizadas por particulares, ya que en el artículo 3 de la misma Convención Internacional se indica que los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar las desapariciones “que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables”. Además, la Corte Interamericana ha establecido que la obligación de investigar se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado” (De León, et. al., 2010: 2).



Estas responsabilidades, por las cuales el Estado debe rendir cuentas, están vigentes hasta que no se esclarezcan los casos de desaparición de personas, pues la Convención Interamericana establece que el delito de desaparición tiene un carácter continuo o permanente –artículo 3–, ya que mientras no se dé con el paradero de la víctima su desaparición se actualiza constantemente. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, COIDH, ha señalado que, sin importar cuándo se dieron los hechos de la desaparición, la obligación de investigar por parte del Estado continúa en tanto no se identifiquen fehacientemente los restos de la persona, o sea encontrada con vida.¹

Este derecho a la verdad tiene una doble dimensión individual y colectiva, ya que corresponde tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto. Por un lado se trata del derecho individual de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de sus derechos; por otra parte es también el derecho de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido, esto tiene que ver con investigar los hechos y divulgar públicamente los resultados de las investigaciones y procesos penales, así como reconocer que la historia de opresión forma parte del patrimonio común que debe ser preservado en la memoria colectiva a fin de evitar la repetición de esas atrocidades así como el surgimiento de tesis revisionistas –que pretendan justificar las violaciones– y negacionistas –que apuesten al olvido (ONU, 2005).

Por último, es importante señalar que la CIDH (ONU, 2006) ha señalado que el Estado democrático requiere de la garantía del derecho a la verdad, lo contrario entorpece el funcionamiento de las instituciones y su credibilidad.

Exigencia de cuentas y eficacia institucional

En el caso de Nuevo León, donde oficialmente hay 2,919 personas desaparecidas –según la última cifra ofrecida por el RNPED² al cierre del 30 de abril 2018–, en los últimos 10 años se han conformado dos colectivos de familiares de víctimas que han utilizado variadas estrategias en su lucha por conocer la verdad sobre lo que pasó con sus familiares desaparecidos y obtener justicia y reparación.

Estos grupos son la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Desaparecidos y Secuestrados de Nuevo León –AMORES–, y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, FUNDENL.



Con el acompañamiento de la asociación civil CADHAC, el trabajo de AMORES se ha centrado en la interlocución con las autoridades de la Procuraduría, -ahora Fiscalía- para revisar los expedientes de investigación y dar seguimiento a los trabajos de los agentes ministeriales. Entre 2011 y 2018 llevaron a cabo 30 reuniones de trabajo (CADHAC, 2018, enero 31), en cada una participaron los familiares de las víctimas asesorados por CADHAC, y los agentes del Ministerio Público encargados de realizar las diligencias. Solamente durante 2011 y 2015, el titular de la Procuraduría se involucró en estas sesiones, con el cambio de gobierno el nuevo procurador dejó de participar personalmente. En esas reuniones se revisaban los expedientes de investigación de casos de desaparición de personas; allí los familiares pedían explicaciones directamente a los agentes del Ministerio Público sobre las diligencias que han realizado, y sugerían nuevas acciones que ayudaran a encontrar a sus seres queridos. Al finalizar cada encuentro se asumían compromisos por parte de la autoridad cuyo cumplimiento se revisaba en la siguiente reunión (Villarreal, 2015).

Este modelo de trabajo colaborativo entre familiares de víctimas de desaparición y autoridades ministeriales ha sido considerado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, GTDFI, una buena práctica que favorece el papel de los familiares de las víctimas en las investigaciones (ONU, 2015, septiembre 11).

De parte de la FGJNL no hay información pública disponible acerca de los resultados de estas reuniones de interlocución con familiares de personas desaparecidas. Por su parte, CADHAC sí ofrece información pública sobre los resultados de estas reuniones de trabajo. De acuerdo con el boletín emitido por la organización el 30 de agosto de 2017:

en las primeras 28 reuniones –entre junio 2011 y abril 2017– se revisaron expedientes correspondientes a 236 personas desaparecidas, además, como resultado de ese trabajo conjunto entre familiares, autoridades y CADHAC se consignaron 63 personas, se ha localizado a 169 personas –75 con vida y 94 sin vida que fueron identificadas por ADN (CADHAC, 2017, agosto 30).

No hay información disponible sobre expedientes revisados en las reuniones 29 y 30 que se efectuaron en diciembre de 2017 y enero de 2018 respectivamente.

A partir de la reunión número 28 realizada el 27 de abril de 2017 se efectuó un cambio en la metodología de trabajo, según lo refiere CADHAC en un comunicado de prensa:



En esta ocasión, además de la revisión habitual, se utilizó un nuevo método de trabajo buscando identificar otras variables de información para la localización de personas. Si bien, el método de revisión de casos como se había venido realizando, seguirá funcionando, este nuevo método pretende conocer de manera integral el contexto social de violencia que se desarrolló en el estado a partir de 2007 y comprender el papel que jugaron los actores involucrados. Esperamos que este nuevo camino nos permita acercarnos a la verdad y encontrar justicia para estas víctimas y sus familiares (CADHAC, 2017, abril 27).

No hay experiencias similares que sirvan para comparar si los resultados logrados con este mecanismo de trabajo colaborativo son suficientes o no. El GTDFI no especifica bajo qué criterios es que considera la experiencia de Nuevo León una buena práctica, solo lo afirma. Sin duda, como ya se señaló en otro apartado, en instrumentos internacionales y la misma Corte Interamericana han señalado que es indispensable la participación de las víctimas y sus familiares en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, y específicamente de desapariciones. Pero también se advierte que esa participación se ha de buscar no como mera colaboración, sino como medio para esclarecer la verdad y así acceder a la justicia y la reparación.

En Nuevo León, además de AMORES, hay otra agrupación de familiares de personas desaparecidas que también ha emprendido la lucha pública por encontrar a sus seres queridos. En 2012, una de las integrantes de lo que antes era LUPA –Leticia Hidalgo, quien busca a su hijo Roy desaparecido en 2011– decidió iniciar otro grupo de familiares y se crea Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, FUNDENL, con el apoyo de integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, organización que surgió en 2009 en esa entidad. Desde su creación, FUNDENL ha realizado plantones frente al Palacio de Gobierno para demandar del titular del Ejecutivo la atención a los casos de desaparición, en esas ocasiones las integrantes del colectivo suelen bordar pañuelos con los nombres de sus seres queridos que luego exhiben ante el público; con esta acción, el colectivo mantiene viva la campaña Bordando por la Paz que inició en 2011 en Coyoacán y se extendió a muchas plazas del país (Ábrego, 2017, agosto 30; Cubero, 2016, agosto 30; Patraca, 2013, enero 10).

En enero de 2014, FUNDENL “toma” la plaza conocida como “El Breve Espacio”, localizada en Washington y 5 de Mayo, y desde entonces la denominan Plaza de los Desaparecidos. En una escultura de cristal dedicada a la transparencia ubicada al centro



de una fuente que se encuentra en el lugar colocaron 13 calcas con los nombres de 13 de sus seres queridos desaparecidos (De la Fuente, 2016, enero 10). Un mes después colocaron una placa para recordar a los desaparecidos. De este modo, convirtieron la plaza en un memorial, en un espacio a la vez de denuncia y de recuerdo. Sin embargo, en abril de ese año las calcas fueron retiradas por desconocidos, pero los integrantes de Funden volvieron a colocar otras nuevamente. A partir de entonces, en este sitio se reúnen semanalmente para continuar bordando pañuelos que conmemoran a cada uno de los desaparecidos (*Sin Embargo*, 13 de abril 2014).

De las acciones que emprende FUNDENL hay tres que abordamos en este trabajo por su relación con la participación de las víctimas en el esclarecimiento de la verdad. Esas acciones son las mesas de evaluación de investigaciones efectuadas a partir de 2014 de manera esporádica, la realización de brigadas de búsqueda en campo y la activación de mecanismos de rendición de cuentas.

Entre agosto de 2014 y julio de 2015, FUNDENL participó en mesas de trabajo con la PGJNL para evaluar la investigación que realiza el ministerio público en ocho casos de desaparición. Tras 10 meses de reuniones, el colectivo consideró insuficiente el trabajo de la autoridad. Con la llegada de la administración estatal encabezada por Jaime Rodríguez Calderón en octubre de 2015, FUNDENL reanudó las mesas de trabajo, pero de nuevo encontró ineficiencia y falta de recursos de la PGJNL para emprender las investigaciones. Puesto que considera insuficiente la investigación de las autoridades para localizar a los desaparecidos, el colectivo ha emprendido lo que llaman brigadas de búsqueda independiente en campo. Entre 2015 y 2016 realizaron cinco brigadas en las que han encontrado restos de al menos una persona reportada como desaparecida y que ya ha sido identificada mediante pruebas genéticas (FUNDENL, 2015, noviembre 06; Peña Calvillo, 2016, diciembre 04).

Ante lo que consideran la inoperancia de la PGJNL, FUNDENL ha recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar quejas contra la Procuraduría, y ha logrado que el ombudsman emita cuatro recomendaciones³ relacionadas con cuatro casos que acompaña este colectivo, donde se señala a la PGJNL como responsable de omitir respetar el derecho de acceso a la justicia y dilación en las investigaciones.

FUNDENL no recibe un acompañamiento formal y constante de alguna organización civil de derechos humanos, son los mismos familiares de las víctimas quienes



directamente aparecen en el espacio público emitiendo declaraciones, interactuando con autoridades, realizando denuncias, eso les ha dado visibilidad y protagonismo.

La respuesta del Estado ante las desapariciones

Las respuestas estatales ante las desapariciones ocurridas en Nuevo León han sido empujadas por las acciones que los colectivos de familiares realizan en calles, plazas y en internet: denuncias públicas, marchas, plantones, vigilias, recolección de casos, exposición de fotografías de las víctimas, murales callejeros.

Resultado de las presiones ejercidas por AMORES y FUNDENL, el gobierno y el Congreso de Nuevo León pasaron de la indolencia inicial a emprender acciones encaminadas a atender el problema de la desaparición de personas:

- a) Mesas de seguimiento de casos, de 2011 a 2018.
- b) Tipificación del delito de desaparición forzada, en diciembre 2012.
- c) Elaboración del Protocolo de Búsqueda Inmediata, y creación del GEBI Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, en 2014.
- d) Declaración de ausencia por desaparición, en 2015.
- e) Mesas de evaluación de investigaciones, a partir de 2014 de manera esporádica.
- f) Acompañamiento de agentes periciales en las brigadas de búsqueda en campo realizadas por familiares, en cuatro ocasiones entre 2015 y 2016.

Las tres primeras acciones han sido destacadas por el GTDFI como buenas prácticas que recomienda sean replicadas en otras entidades del país. Son respuestas estatales impulsadas por AMORES y CADHAC, aunque en lo referente a tipificación del delito de desaparición forzada FUNDENL también presentó su iniciativa pero no fue tomada en cuenta.

En cuanto a la declaración de ausencia por desaparición, los dos colectivos de familiares presentaron sus iniciativas, pero la que prevaleció fue la impulsada por AMORES y CADHAC. Las dos últimas acciones estatales enlistadas se ejecutaron a instancias de FUNDENL, y sobre ellas no hay mención en el documento del GTDFI.

Las acciones emprendidas por el gobierno de Nuevo León frente al problema de la desaparición de personas, revelan que se trata más bien de reacciones ante la presión



ejercida por los familiares de las víctimas y que por tanto tienden a diluirse en el tiempo y quedar si acaso como buenos propósitos.

No se trata de una asunción responsable del problema público y por tanto de la búsqueda de respuestas que constituyan políticas perdurables en el tiempo para detener el problema y facilitar el acceso a la justicia para las víctimas.

La tipificación de la desaparición forzada, el establecimiento de mesas de seguimiento de expedientes de investigación, la elaboración de procedimiento de búsqueda son fruto de iniciativas ciudadanas que han logrado sacar por momentos a la maquinaria estatal del mutismo y la inacción cómplice que hace perdurable la desaparición impune de mujeres y hombres. Pero esa acción estatal es momentánea, como lo muestra por ejemplo la ineficiencia del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata constatada por un monitoreo realizado por CADHAC que solo resultó efectivo un año y después se volvió inoperante (CADHAC, 2017).

Las mesas de seguimiento a expedientes de investigación sobre casos de desaparición, aunque constituyen una novedosa experiencia de interlocución e incidencia de los familiares de las víctimas en el trabajo de procuración de justicia, enfrentan también la indolencia gubernamental cuando la falta de voluntad política prevalece y resta importancia a este trabajo, como ha ocurrido con el gobierno de Rodríguez Calderón a partir de octubre de 2015. Además, aunque las mesas de interlocución se han realizado de manera periódica desde 2011, la mayor parte de las y los desaparecidos siguen sin ser localizados. También es importante destacar que más de cinco años de experiencia de interlocución no han significado un cambio en la forma de trabajar de la FGJNL para con todos los familiares de personas desaparecidas, pues las mesas de interlocución solo se realizan con algunos, con aquellos que las impulsaron –CADHAC y AMORES–, pero la Fiscalía no da este mismo trato a las demás víctimas que no están organizadas. Es decir, se trató de una interlocución bajo demanda y presión de las víctimas, no como una nueva forma de actuar de la FGJNL para atender estos

Reflexiones finales

En este trabajo hemos revisado una de las estrategias que colectivos de familiares de personas desaparecidas en Nuevo León han utilizado para exigir cuentas y conocer la verdad, se trata de la interlocución formal con autoridades ministeriales para revisar el trabajo de investigación que realizan e impulsar avances que conduzcan a dar con el paradero de las víctimas. Esta estrategia se encuadra dentro de la lucha por el derecho a la verdad que contempla la participación de familiares en las indagaciones sobre



graves violaciones a derechos humanos. También hemos revisado una de las estrategias implementadas por el gobierno de esta misma entidad federativa que consiste en la creación e implementación de un procedimiento de búsqueda inmediata. La importancia de esta acción estatal radica en que el derecho a la verdad está vinculado con la realización de investigaciones eficaces y oportunas, como una forma de rendir cuentas.

Aunque el GTDFI ha calificado como buenas prácticas las reuniones de trabajo entre la PGJNL y familiares de víctimas, no se encontraron criterios para determinar por qué o para quiénes esa práctica es positiva, más allá de generar colaboración y no confrontación. Este método de interlocución solo se ha aplicado a algunos casos acompañados por CADHAC, pero la mayoría de los casos de desaparición en Nuevo León no son atendidos de esta forma. En cuanto a la localización de las víctimas, en el 70 por ciento de los casos las víctimas han sido encontradas, casi en la misma proporción vivas que sin vida. Pero en la identificación de responsables se ha avanzado poco, pues desde hace tres años se ha dado la misma cifra de 63 personas consignadas como presuntas responsables. La calidad de las investigaciones no ha sido la suficiente como para conocer el paradero de gran parte de las víctimas, de manera que la cifra de personas no localizadas sigue en aumento. El mecanismo de participación de familiares de las víctimas en las investigaciones sigue sin asumirse como método rutinario de trabajo por la PGJNL, sino que constituye el mecanismo de trabajo que se ha establecido solamente con algunos familiares organizados. Luego de más de seis años de experiencia de interlocución no han significado un cambio en la forma de trabajar de la PGJNL para con todos los familiares de personas desaparecidas, pues las mesas de interlocución solo se realizan con algunos, con aquellos que las impulsaron –AMORES con el acompañamiento y asesoría de CADHAC–, pero la autoridad no da este mismo trato a las demás víctimas que no están organizadas. Es decir, se trata de una interlocución bajo demanda y presión de las víctimas, no como una nueva forma de actuar de la PGJNL para atender estos casos.

La eficacia de los procesos investigativos no es contundente. La información proporcionada por la PGJNL indica que en gran parte de los casos denunciados de manera inmediata como desapariciones las víctimas regresan a su domicilio sin que eso pueda atribuirse al trabajo del GEBI. Por otro lado, la organización FUNDENL ha denunciado la ineficacia de los procedimientos de investigación en algunos casos, y CADHAC encontró que el Procedimiento de Búsqueda Inmediata no se aplicó por lo



menos entre 2015 y 2016. Por tanto, no basta con que un gobierno elabore procedimientos y protocolos que puedan constituir una buena práctica, es necesaria la constante vigilancia y monitoreo independiente de la actuación gubernamental. La participación colaborativa de los familiares en las investigaciones es indispensable, pero también lo es su intervención crítica y vigilante para señalar deficiencias y exigir que los procesos investigativos, primero, se lleven a cabo, y segundo pero no menos importante, que se efectúen no como meros formalismos que engrosan expedientes con acumulación de acciones infructuosas, sino firmemente orientados a desentrañar los hechos ocurridos hasta encontrar a las víctimas y los responsables. Esta calidad de investigación es escasa. El número de víctimas que según datos oficiales siguen sin ser localizadas sigue en aumento mes a mes, de acuerdo al RNPED. El ritmo de crecimiento de esta tragedia es un reflejo de la falta de capacidades estatales para reconocerla y afrontarla, y se traduce en una inexistente rendición de cuentas frente al problema de la desaparición de personas.

La crisis de derechos humanos que prevalece en México tiene nuevas manifestaciones como es el hallazgo de numerosas fosas clandestinas en distintos puntos del país, que ha puesto en evidencia la falta de capacidades técnicas de gran parte de los gobiernos estatales para afrontar la tarea de identificación de restos con lo que se alejan las posibilidades de conocer paradero de miles de víctimas de desaparición. La impunidad prevalece también ante el escaso avance de los procesos investigativos, la lentitud con que se implementan los mecanismos contemplados en la Ley General como son las comisiones locales de búsqueda, y la carencia de recursos para realizar las tareas de localización de víctimas. La administración federal que entró en funciones en diciembre de 2018 tiene un enorme reto porque si la impunidad y la falta de resultados continúa como en los 12 años anteriores, será cada vez mayor la desconfianza hacia las instituciones de justicia y la capacidad del Estado para cumplir con su obligación de garantizar derechos fundamentales a la población.

Notas

¹ COIDH, *Caso Anzualdo Castro vs Perú*. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, numeral 185, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_202_esp.pdf; COIDH, *Caso ChitayNech y otros vs Guatemala*. Sentencia de 25 de mayo de 2010, numerales 240 y 241, disponible en <https://bit.ly/35ivABE>; COIDH, *Caso Gelman vs Uruguay*. Sentencia



de 24 de febrero de 2011, numeral 258, disponible en <https://bit.ly/2XkgGWZ> (consultados el 18 de abril de 2018).

² El RNPED quedó abrogado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el último corte corresponde al 30 de abril 2018. La Ley General establece que la información del RNPED será trasladada a un nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, que al cierre de esta ponencia aún no ha sido dado a conocer.

³ Recomendaciones 6/2017, 7/2017, 15/2017 y 18/2017.

Bibliografía

Ábrego, Miriam (2017, agosto 30) “Sin avance en identificación de restos en García: FUNDENL”, *El Horizonte*. Disponible en <http://www.elhorizonte.mx/local/sin-avance-en-identificacion-de-restos-en-garcia-fundenl/1945977> [Consultado el 12 de mayo de 2019]. CADHAC, (2017) *Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata. Balance abril 2015- diciembre 2016*. Monterrey, México.

CADHAC, (2017, abril 27) *En Reunión 28 con PGJNL, AMORES y CADHAC buscan nuevos caminos*. Boletín 1704/15. Disponible en <https://bit.ly/2Xkh3kl> [Consultado el 29 de abril de 2019].

CADHAC, (2017, agosto 30) *10 años de búsqueda de personas desaparecidas en Nuevo León*. Boletín 1708/35. Disponible en <https://bit.ly/3pST6wX> [Consultado el 29 de abril de 2019].

CADHAC, (2018, enero 31) AMORES, CADHAC y PGJNL revisan expedientes y avances en reunión No. 30. Boletín 1801/04. Disponible en <https://bit.ly/3bsVy9B> [Consultado el 12 de marzo de 2019].

CIDH, (2014) *Derecho a la verdad en las Américas*. Disponible en <https://bit.ly/3ol1N2A> [Consultado el 29 de abril de 2019].

Cubero, César (2016, agosto 30) “Efectividad del Grupo de Búsqueda es 0.2%: FUNDENL”, *Milenio*. Disponible en <https://www.milenio.com/estados/efectividad-grupo-busqueda-0-2-fundenl> [Consultado el 12 de febrero de 2019].

De la Fuente, Daniel (2016, enero 10) “Del dolor al activismo”, *El Norte*. Disponible en <https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=737335> [Consultado el 19 de mayo de 2019].

De León, Gisela, Krsticevic, Viviana y Luis Obando, (2010) *Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos*, Buenos Aires, CEJIL.

FUNDENL, (2015, noviembre 06) “1ª Brigada independiente de búsqueda de personas



desaparecidas en Nuevo León”. *El Barrio Antiguo*, No. 127. Disponible en <https://bit.ly/3nof3SR>

Newsweek Nuevo León, (2018, 01 de junio) *Apoyan colectivos de 4 estados exigencia de FUNDENL para no ratificar a Balderas Rodríguez*. Disponible en <https://bit.ly/3bjq2dQ> [Consultado el 29 de abril de 2019].

OACNUDH, (2006) *Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo*. Nueva York y Ginebra. Disponible en <https://bit.ly/3olkkMo> [Consultado el 2 de junio de 2019].

ONU, (2005) *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*. Disponible en <https://bit.ly/38lp92L> [Consultado el 9 de enero de 2019].

ONU, (2006) *Estudio sobre el derecho a la verdad*. Disponible en <https://bit.ly/38jsaAj> [Consultado el 9 de enero de 2019].

ONU, (2015, septiembre 11). *Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, A/HRC/30/38/Add.4. Disponible en <https://bit.ly/2XhkWXn> [Consultado el 15 de enero de 2019].

Patraca, Beatriz (2013, enero 10). “Yo busco a Roy”, *La Jornada de Oriente*. Disponible en http://www.lajornadadeoriente.com.mx/columna/tlaxcala/opinion/yo-busco-a-roy_id_18466.html [Consultado el 03 de junio de 2019].

Peña Calvillo, Rubén (2016, diciembre 04) “Rastrear con un dron y perra entrenada fosas clandestinas”, *El Mañana*. Disponible en <https://www.elmanana.com/rastrear-dron-perra-entrenada-fosas-clandestinas-dron-fosas-clandestinas-evidencias-zona-exterminio/3523651> [Consultado el 03 de junio de 2019].

Pillay, Navanethem, (2012) “Establishing effective accountability mechanisms for human rights violations” en *UN Chronicle, The Magazine of the United Nations*. Vol. XLIX, Núm. 4. Disponible en <https://bit.ly/2Ltm7QG> [Consultado el 9 de junio de 2019].

Sin Embargo (2014, abril 13). “ONG en Nuevo León vuelve a colocar los nombres de 13 desaparecidos, retirados ‘misteriosamente’ de plaza”, *Sin Embargo*. Disponible en <https://www.sinembargo.mx/13-04-2014/961684> [Consultado el 11 de febrero de 2019].

Villarreal, María Teresa, (2015) “Las mesas de seguimiento de casos de personas desaparecidas, una experiencia de incidencia en Nuevo León, México” en *Revista Enfoques*. Vol. XIII, Núm. 23, pp. 85-97.



Más allá de los Estados: La Iniciativa de Infraestructura para la Región Sudamericana y la sociedad civil entre silenciamiento y oposición.

Dario Clemente¹

Resumen

La Iniciativa de Infraestructura para la Región Sudamericana (IIRSA/COSIPLAN-UNASUR) es una política regional de energía, transporte, infraestructura y telecomunicaciones lanzada por el gobierno brasileño en el año 2000. Si bien todos los Estados sudamericanos han apoyado la IIRSA, su creciente impopularidad ha llevado a un desarrollo “silencioso” de la misma. Esto se debe a que el desastroso impacto socio-ambiental de las obras que componen la iniciativa ha despertado en toda la región la oposición de comunidades indígenas, movimientos sociales y sindicatos, que se han organizado para resistir su ejecución. Sin embargo, otros actores sociales se han movilizado en favor de la realización de la IIRSA, no solo cámaras empresariales interesadas a las obras, sino también en algunos casos movimientos sociales y sindicatos vinculados a los gobiernos progresistas de la región. El conflicto alrededor de la IIRSA se debe por un lado al protagonismo dominante de Brasil y de empresas de ese país, responsables de actos de corrupción y otros ilícitos, y, por el otro, al choque subyacente entre modelos de desarrollo. En este sentido, los varios actores en juego han hecho un uso estratégico de la referencia a la integración regional, al concepto de desarrollo y a la misma iniciativa para justificar sus acciones. Un análisis de la recepción de la IIRSA por parte de la sociedad civil de diferentes países sudamericanos muestra como los movimientos sociales son el actor que más ha logrado construir una acción que disputara el sentido y el modo de realización de la iniciativa. Sin embargo, a pesar de que la protesta social ha llevado a la cancelación de algunas obras, esto no se ha traducido en un cuestionamiento global de la iniciativa, respaldado por una sólida acción colectiva transnacional.

Palabras clave

Iniciativa de Infraestructura para la Región Sudamericana; Sociedad Civil; Movimientos sociales; Brasil; Acción colectiva transnacional.

Abstract

The Infrastructure Initiative for the South American Region (IIRSA / COSIPLAN-UNASUR) is a regional energy, transportation, infrastructure and telecommunications



initiative launched by the Brazilian government in 2000. While all South American states support IIRSA, its growing unpopularity has "silenced" its development. This is because the disastrous socio-environmental impact it implies has produced widespread opposition by indigenous communities, social movements and unions all over the region, which organized to resist its execution. However, other social actors have mobilized in favor of IIRSA, not only business chambers, but also, in some cases, social movements and unions linked to the progressive governments of the region. The conflict around IIRSA can be explained with the dominant "imperialist" role of Brazil and companies of that country, responsible for corruption and other illegal acts, but also for the underlying clash between development models. In this sense, the various stakeholders have each made strategic use of the reference to regional integration, the concept of development and the very initiative to justify their actions. An analysis of the reception of the IIRSA by civil society from different South American countries shows how social movements are the actors that most managed to build an action that disputes the meaning of the initiative and the way it is carried out. However, although social protest led to the cancellation of some parts of IIRSA, this has not translated into a global questioning of the initiative, backed by a solid transnational collective action.

Keywords

Infrastructure Initiative for the South American Region; Civil society; Social movements; Brazil; Transnational collective action.

Introducción

La Iniciativa de Infraestructura para la Región Sudamericana (IIRSA/COSIPLAN-UNASUR) es una política regional de energía, transporte, infraestructura y telecomunicaciones lanzada por el gobierno brasileño en el año 2000. Se concentra en los sectores de energía, transporte, infraestructura y telecomunicaciones, apuntando a mejorar la conectividad interna a la región y sobre todo hacia Asia, por medio de una serie de conexiones intermodales, además de aumentar las cadenas productivas con valor agregado y el monto de las exportaciones. A tal fin, las obras se distribuyen según ejes geográficos que se superponen y cubren la casi totalidad del territorio sudamericano, estructurados en función de áreas de productividad y exportación. Estos "Ejes de Integración y Desarrollo" (EID) son diez: Andino, Andino del Sur, Capricornio, Amazonas, Escudo Guayanés, del Sur, Hidrovía Paraguay-Paraná, Interoceánico Central, MERCOSUR-Chile, Perú-Brasil-Bolivia. Dentro de estos se señalan por



importancia el Eje Andino y el Eje MERCOSUR-Chile que engloban en el esquema de la IIRSA la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR, el Eje Interoceánico que une estas franjas y los ejes que conectan los países andinos a Brasil en el norte (Eje Amazonas, Eje Perú-Brasil-Bolivia, y Eje Escudo Guayanés (Romegialli, 2007). En general, siendo que la IIRSA está pensada desde la demanda, actual o potencial, de los mercados internacionales, las dos subregiones más importantes son consideradas el Cono Sur, que reúne la mayoría de la población y de la actividad industrial del continente y genera la mayor parte de su PBI, y los ejes Amazonas y Capricornio, conectados a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, por sus riquezas naturales (Ceceña et al., 2007). Si bien todos los Estados sudamericanos han apoyado la IIRSA, su creciente impopularidad ha llevado a un desarrollo “silencioso” de la misma (Cortés, 2014). Esto se debe a que el desastroso impacto socioambiental de las obras que componen la iniciativa ha despertado en toda la región la oposición de comunidades indígenas, movimientos sociales y sindicatos, que se han organizado para resistir su ejecución. Sin embargo, otros actores sociales se han movilizado en favor de la realización de la IIRSA, no solo cámaras empresariales interesadas a las obras, sino también en algunos casos movimientos sociales y sindicatos vinculados a los gobiernos progresistas de la región.

El conflicto alrededor de la IIRSA se debe por un lado al protagonismo dominante de Brasil y de empresas de ese país, responsables de actos de corrupción y otros ilícitos, y, por el otro, al choque subyacente entre modelos de desarrollo. En este sentido, los varios actores en juego han hecho un uso estratégico de la referencia a la integración regional, al concepto de desarrollo y a la misma iniciativa para justificar sus acciones. En esta ponencia analizaremos la recepción de la IIRSA por parte de la sociedad civil de diferentes países sudamericanos, concentrándonos en como la protesta social ha llevado a la cancelación de algunas obras, pero no a un cuestionamiento global de la iniciativa, respaldado por una sólida acción colectiva transnacional.

Estado(s) e instituciones multilaterales

La Iniciativa de Infraestructura para la Región Sudamericana tiene origen en la “Primera Cumbre de Presidentes Sudamericanos”, organizada por el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso en el año 2000 en ocasión de los quinientos años del “descubrimiento” de Brasil (Agostinis y Palestini 2014), donde recibió el apoyo de la totalidad de los países del subcontinente. Desde un primer momento la propuesta de la IIRSA ha sido encuadrada en un discurso orientado a la promoción de la integración regional, presentando a la escasez de conexiones infraestructurales entre los países



como el principal obstáculo. En particular, la idea inicial del ex presidente brasileño Cardoso de lograr una articulación energética en Sudamérica tenía como referencia a la integración de las industrias del carbón y del acero en la primera fase del proceso de creación de la Unión Europea (Agostinis y Palestini 2014).

En este sentido, el actor fundamental en la promoción de la IIRSA es el Estado brasileño, ya que la iniciativa además se basaba sobre una metodología de planificación territorial ensayada previamente en Brasil y es en cierto sentido su proyección a nivel regional (Gonçalves, 2012). En efecto, la idea de “ejes de desarrollo” viene de Eliezer Batista, ex-presidente de la minera Vale y ex-ministro de Minas y Energía del Gobierno de João Goulart, y fue objeto de un estudio encargado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de ese país en 1998, antes de ser aplicada en el Plan Plurianual de inversiones del Gobierno Federal brasileño “Avanza Brasil” en el período 2000-2003 (Alem & Cavalcanti, 2005; Cabrera, 2015a; Couto, 2008).

Sin embargo, claves en la elaboración y en la realización de la IIRSA han sido también algunas Instituciones Financieras Internacionales (IFI) de alcance regional: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata (FONPLATA). Estas instituciones conforman el Comité de Coordinación Técnica (CCT) de la IIRSA y sus funcionarios tienen el rol de coordinar y proveer apoyo técnico y financiero a los países para el desarrollo de los proyectos (Molina, 2015).

Pero a pesar de su origen, la iniciativa funda su legitimidad sobre el carácter amplio que alcanza al recibir el apoyo de todos los gobiernos sudamericanos. En este sentido, la estructura de gobierno y de financiamiento original de la IIRSA sufre cambios profundos en el ámbito de la elección en la región en los primeros años 2000 de gobiernos de izquierda y centroizquierda, los cuales se mostraron desde el inicio muy críticos con los proyectos vinculados en algún modo al modelo neoliberal y controlados por las IFI, el BID en particular (Agostinis y Palestini 2014). Entre los más vocales se encuentran el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez y el de Bolivia Evo Morales, que abogaron para una reconfiguración de la IIRSA. La intervención de este último al Foro Social Mundial de Cochabamba de 2006 resume fehacientemente el espíritu general de la oposición a la IIRSA que venía montando en ese entonces: “Debemos replantear IIRSA para considerar el deseo de la gente de ver caminos para su desarrollo, no carreteras para su explotación que atraviesan corredores de miseria y aumentan la deuda nacional” (Dávalos González, 2009:9). Para recuperar un mayor control en la realización de la



IIRSA por parte de los Estados y desplazar las IFI como sujetos principales de esta se establecen en 2004 las Coordinaciones Nacionales, antes ausentes, y sobre todo se procede en 2011 a la incorporación de la iniciativa al nuevo Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN, creado en 2009) de UNASUR, como su foro técnico (Agostinis y Palestini 2014). La inclusión de la IIRSA dentro de la estructura de UNASUR, subordinada ahora a un nuevo Comité Coordinador y complementada por Grupos de Trabajo interministeriales, sirve también para señalar, en las intenciones de los gobiernos, un compromiso con la promoción de un desarrollo más sustentable que el representado por el “regionalismo abierto”. A nivel técnico, por otro lado, se optó para identificar 31 proyectos estratégicos principales que desde entonces conforman la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API), dentro de la cartera de IIRSA, reuniendo a su vez 103 proyectos individuales considerados “de carácter estratégico”. En este grupo se incluye al menos una obra estratégica por eje y todos los países sudamericanos resultan involucrados. Esta reorientación se refleja también en el aumento de las fuentes de financiamiento, sobre todo en el caso de Brasil. Durante la primera presidencia de Lula da Silva (2003-2007) se autoriza el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) a financiar obras de la IIRSA en Brasil y en el exterior, y se activa el Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC) en 2007 (Carvalho, 2012).

Sin embargo, después de una fase inicial “exitosa”, la implementación de la iniciativa empieza a despertar descontento en las poblaciones a causa del alto impacto socioambiental que tiene la mayoría de las obras vinculadas a esta. Es así como la oposición popular a la realización de IIRSA que se ha disparado en muchas ocasiones ha llevado los gobiernos de la región a “silenciar” la iniciativa (Cortés, 2014). Es decir que, al ser incorporada en los documentos oficiales a nivel nacional, la IIRSA es presentada como una plataforma de obras separadas y con efectos exclusivamente a nivel local, y de forma creciente los gobiernos de la región han intentado relacionar las obras con planes nacionales de infraestructura o acuerdos bilaterales con Brasil desligados de la iniciativa regional (Dávalos González, 2009). Según Cortés (2014), este esfuerzo para separar las obras del nombre de IIRSA apunta a desvincularlas de un proceso social y político más amplio, es decir la reorganización territorial del continente según una racionalidad de mercado, limitando el debate público y dando un carácter “técnico” a la discusión sobre los efectos socioambientales de las obras.



A título de ejemplo, en el caso de la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en Bolivia, que tenía que atravesar el parque amazónico TIPNIS, parte del “corredor norte” del eje Perú-Brasil-Bolivia, el gobierno de ese país ha recurrido en una primera fase al discurso desarrollista e integracionista para influenciar la opinión pública sobre la necesidad de realizar la obra (Cortés, 2014), pudiendo contar además con la intervención del ex presidente brasileño Lula, que en agosto del 2011 viajó a la ciudad de Santa Cruz para abogar a que el proyecto ejecutado por la empresa OAS, y considerado estratégico por parte de Brasil, continuara (Molina, 2015). Sin embargo, frente al recrudecimiento de la protesta, aglutinada alrededor de la organización de las “Marcha Indígenas”, el discurso integracionista se depuro de cualquier referencia directa a la IIRSA.

Según Cortés (2014), esta “despolitización” de las obras, unida a la ausencia de un plan integral de desarrollo de alcance regional propio de la IIRSA, permitió que la iniciativa fuera asumida como propia por gobiernos de orientación política profundamente diferente usando el mismo abordaje “técnico” a la necesidad de una interconexión física entre los países de la región.

La sociedad civil y los movimientos sociales

Mas allá de los Estados, creemos que es necesario considerar la dimensión de la sociedad civil para poder apreciar en su entereza el desarrollo de la IIRSA y sus profundas contradicciones. En este sentido, y en sintonía con una interpretación gramsciana del concepto, entendemos aquí sociedad civil como algo diferente a la versión edulcorada y ajena al conflicto que está en uso, algo así como una sumatoria de ONG y asociaciones civiles. En particular, consideramos a la sociedad civil como un terreno de lucha entre fuerzas sociales y proyectos hegemónicos alternativos (Rupert, 1995), a la vez que un componente fundamental del poder estatal en la concepción “ampliada” de este (Estado= Sociedad Política+ Sociedad Civil) de derivación gramsciana (Thwaites Rey, 2007). Aquí la dimensión del conflicto es central, ya que permitiría “medir” el éxito de un proyecto hegemónico, como puede ser pensada la IIRSA, analizando el nivel de legitimidad alcanzado por este en la sociedad civil y rastreando la presencia de conflicto social vinculable a su desarrollo (Germain y Kenny, 1998). Al mismo tiempo, como “dimensión estatal”, resulta clave investigar la sociedad civil por la influencia que las batallas que se libran en este nivel tienen sobre el accionar de los Estados, legitimando diferentes órdenes sociales y modelos de desarrollo. En este sentido, es importante notar que no se puede prescindir de un análisis de la



influencia de la sociedad civil sobre la toma de decisiones si se quiere evitar reificar la capacidad de agencia de los Estados y desconectarla de las relaciones sociales entre clases (Kan, 2015).

Sin embargo, cualquier uso del concepto de sociedad civil afuera de la esfera nacional se encuentra con varias dificultades, vinculadas a la ausencia de la dimensión estatal propiamente dicha, un “Estado internacional”, elemento que Gramsci consideraba fundamental para que pueda existir la sociedad civil. Si para él era concebible un Estado sin sociedad civil, o con una sociedad civil débil, como acontecía en la Rusia zarista, era impensable imaginar una sociedad civil sin Estado, es decir sin “sociedad política”. Esto lleva algunos autores a excluir la posibilidad de una sociedad civil internacional de tipo gramsciano (Germain y Kenny, 1998), mientras que otros la rescatan imaginando una Sociedad Política de nuevo tipo compuesta por un entramado de instituciones internacionales (FMI, BM, G8, Comisión Trilateral), una naciente “estructura internacional de autoridad política” (Cox, 1987).

Volviendo a nuestro tema, las mismas problemáticas aplican a la hora de intentar conceptualizar de forma orgánica una sociedad civil internacional en el contexto regional, es decir una “sociedad civil latinoamericana” o incluso “sudamericana”. No obstante, creemos que es oportuno no abdicar del estudio de las sociedades civiles de los países sudamericanos, por separado y en su articulación compleja, si queremos analizar fehacientemente el despliegue de IIRSA y las varias reacciones que ha despertado.

En nuestra investigación preliminar, pudimos reconstruir los posicionamientos generales de varios actores con respecto a la IIRSA y sus obras.

Entre los más vocales se encuentran las cámaras empresariales, que han asumido en general una postura de apoyo al desarrollo de infraestructura productiva, y es común encontrar declaraciones de satisfacción de las varias cámaras empresariales para el desempeño de los respectivos Estados en impulsar las obras de IIRSA que se ejecutan en territorio nacional. Es así como el desarrollo de las obras viarias de la IIRSA, sobre todo las carreteras, las hidrovías y las redes ferroviarias que forman parte de los “corredores bioceánicos”, es percibido positivamente por empresas de variado tamaño, que podrían beneficiarse de la mejora en el transporte de productos para insertarse en cadenas de valor regionales (Agostinis y Palestini 2014).



Además, oportunidades de negocios surgen de la construcción misma de los proyectos de infraestructura, la cual requiere para su realización la conformación de consorcios de grandes dimensiones con una red de proveedores locales e implica a menudo la asociación entre constructoras nacionales y las *empreiteras* brasileñas (Durand y Campodónico, 2010).

Sin embargo, es interesante observar como este apoyo puntual a las obras no parece derivar de un reconocimiento de su vinculación con la Iniciativa, aun menos traducirse en un sostén financiero a la misma, ya que el origen de los fondos empleados sigue siendo principalmente público. Ejemplos son los casos de la realización de la “Red Vial Fundamental” en Bolivia, la transformación de la Ruta Nacional 18 en autopista en Argentina (corredor bioceánico Coquimbo-Porto Alegre del Eje MERCOSUR-Chile) o de las mejoras de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Eje Paraguay-Paraná), siempre en Argentina. En estos casos las cámaras empresariales y los intendentes locales subrayan las ventajas en la ocupación, cadenas de valor o en el turismo, pero hacen escasa referencia a los ejes de la IIRSA a los cuales las obras corresponden, aun menos al plan general de la iniciativa. En este sentido, el apoyo general que estos sectores de la sociedad civil ofrecen al desarrollo concreto de la IIRSA no parece traducirse en un consenso capaz de garantizar su continuidad como proyecto regional más allá de la fase de integración regional patrocinada por Brasil, pudiendo retroceder rápidamente a un conjunto de obras sin un diseño político orgánico.

Con respecto al consenso hacia la IIRSA en otros sectores de la sociedad civil de los países de la región, se han registrado numerosos casos de oposición a la realización de las obras más impactantes a nivel socioambiental. Esta oposición ha sido motivada por los grandes daños ecológicos y ambientales que las obras comportan en zonas protegidas, así como la amenaza que representan por la continuidad de la vida comunitaria de poblados indígenas (Torres, 2015). Los actores que entran en juego en estos casos son usualmente las mismas comunidades afectadas a las cuales se suman asociaciones varias, ONG, grupos de intelectuales y activistas y, en algunos casos, sindicatos. En este sentido, se ha observado un nivel creciente de conflicto social alrededor de las obras de la iniciativa, visibilizando la disconformidad de amplios sectores de la población con la idea de desarrollo económico y social propuesta por la IIRSA a través de varias manifestaciones de oposición -marchas, caravanas, petitorios etc.- que han logrado en algunos casos detener la realización de las obras. A título de ejemplo, en 2014 Perú ha archivado el acuerdo energético con Brasil citando la



indisponibilidad a comprometer recursos naturales peruanos para abastecer un país extranjero, en perjuicio del mismo mercado interno nacional, con lo cual varios proyectos de represa han quedado congelados. A la base de esta decisión está, entre otras cosas, la movilización de los movimientos sociales peruanos en los departamentos de Madre de Dios, Cuzco y Puno, la cual incluyó medidas como paros regionales (da Fonseca, 2015). A un dictamen negativo sobre la obra de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental se sumó la organización directa de las comunidades nativas asháninka, afectadas por la eventual inundación de sus tierras, donde muchas se habían refugiado para escapar de los enfrentamientos entre Sendero Luminoso y el ejército en los años '80 y '90 (El Comercio, 2011). Los indígenas, organizados en la Central Asháninka del Río Ene (CARE), lograron oponerse a una obra que según el ex ministro de Ambiente hubiera comportado la inundación de 48 mil hectáreas de bosques parcialmente poblados (Perú 21, 2012) y que hubiera destinado cuotas fijas de la energía producida a Brasil para un periodo de 30 años. En favor de la cancelación del proyecto ha jugado también la voluntad del nuevo presidente Ollanta Humala de evitar masacres como la del “baguazo”, ya que las empresas que componían la concesionaria EGASUR (las brasileñas OAS, Furnas e Eletrobrás) habían contratado servicios de seguridad e inteligencia para contener la resistencia a la obra y presidiaban en armas las obras (da Fonseca, 2015).

Sin embargo, en esta como en otras ocasiones, los actores de la sociedad civil que se organizan para frenar la realización de una obra parecen hacerlo motivados por la oposición a ese proyecto en particular y no a la IIRSA en su totalidad.

Por ejemplo, las protestas de los pueblos indígenas Kamentza e Inga contra la construcción de la Carretera Pasto Mocoa en Colombia, que atraviesa la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (RFPCARM) y es parte del Corredor Multimodal “Tumaco-Puerto Asís-Belém do Pará” dentro del Eje Amazonas, han sido motivada también por el reconocimiento de que los intereses detrás del proyecto son de carácter internacional y no solo de los transportadores o de políticos locales, pero esto no se ha acompañado a una denuncia de la IIRSA, pero reconocen que (Cadena Chicunque, 2013). Lo mismo ha ocurrido en el caso del proyecto minero binacional Pascua-Lama explotado en Argentina y Chile por la multinacional canadiense Barrick Gold, que, después de varias protestas, ha sido frenado en el lado chileno (Pascua) en 2013. A pesar de que haya indicios de que el Eje Sur de la IIRSA tenga entre otros objetivos el de proporcionar la infraestructura necesaria para la explotación



minera de esta zona de la cordillera de los Andes (Razeto et al., 2009), la iniciativa no ha sido blanco de las manifestaciones como si lo han sido la compañía minera, los gobiernos nacionales y provinciales o el marco legal excepcional garantizado por el Tratado Minero entre Argentina y Chile (Saguier, 2012).

No obstante la tendencia a concentrar sus esfuerzos en oponerse a obras particulares, los movimientos sociales suelen ser el actor que más hace referencia al conjunto de la iniciativa y a la dimensión estructural de la misma, mucho más que los gobiernos o los empresarios. Esto se debe en parte a que los movimientos sociales, organizaciones o comunidades tienen la necesidad de encuadrar el rechazo a una obra en una lucha más amplia y comunicarla al resto de la sociedad, aun mas si su objetivo es intentar internacionalizarla y conectarla a otras luchas regionales o globales. El ya citado caso del proyecto de carretera dentro del parque amazónico TIPNIS en Bolivia es iluminador en este sentido.

Como nos muestra el trabajo de Jimenez Cortés (2014), el gobierno boliviano pasó de una primera fase en la cual defiende la pertenencia de la obra en cuestión a la IIRSA a otra en la cual cualquier referencia a la iniciativa o incluso a la integración regional desaparece en favor de una asociación con la promoción del desarrollo y la inclusión. Según la autora este “giro” se corresponde con la necesidad de minimizar las posibilidades de rechazo a la obra, cuyas manifestaciones son descalificadas por el gobierno como producto de intervenciones foráneas de ONG y otros actores con objetivos desestabilizadores (Cortés, 2014).

Empero, en la puja de intereses alrededor del proyecto se manifiestan en apoyo al gobierno los cocaleros del altiplano, en mayoría de etnia aymara y quechwa, que ven en la carretera la posibilidad de diversificar su producción y desvincularse de la dependencia de los latifundistas, exportando sus productos hacia el Pacífico sin usar los puertos chilenos. Esto se realizaría conectando la nueva carretera al corredor norte de la IIRSA que atraviesa Brasil, Perú y Bolivia. Este sector, a diferencia del gobierno, hace referencia a la integración regional e indirectamente a la IIRSA, aunque desconoce el plan general de la iniciativa y se limita a abogar para la construcción del corredor. Algunos de estos cocaleros, militantes oficialistas del Movimiento Al Socialismo, reconocen incluso la importancia de Brasil en promover la integración que Bolivia necesita.

Con respecto al componente que rechaza la obra, formada originalmente por las comunidades indígenas que habitan el parque a las cuales se suman sucesivamente



otros actores, se observan varias fases en su uso estratégico de la referencia a la IIRSA. Si bien en los argumentos iniciales de los indígenas, organizados en la Subcentral TIPNIS y en la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), es inexistente cualquier referencia a la iniciativa, a partir del involucramiento de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) se intenta internacionalizar el conflicto y posicionarlo como un problema regional vinculado a la IIRSA y al rol de Brasil en la región. La denuncia de la iniciativa se fortalece aún más con la intervención de varias ONG (CEJIS, CEDIB, FOBOMADE, Fundación Tierra y CEADDESC) que acompañaron las protestas indígenas y que han cuestionado el gobierno del MAS y su adhesión a la IIRSA. Sin embargo, la referencia a la iniciativa nunca termina de afirmarse como eje central en los discursos opositores, algo que también se debe a la necesidad de no enemistarse sectores disidentes del gobierno pero favorables al proyecto desarrollista y lograr su apoyo en la organización de las varias marchas indígenas que se llevan a cabo.

Es así como frente al “silenciamiento” que produce el gobierno cabe a los movimientos sociales, en este caso opositores como oficialistas, hacer el vínculo entre la obra y la IIRSA, encuadrando la disputa en la cuestión más general del desarrollo nacional y regional. Estos discursos, a pesar de no traducirse necesariamente en verdaderos proyectos “contra-hegemonicos”, visibilizan, sin embargo, la disputa que se produce alrededor del enfoque dominante de la IIRSA y ponen en discusión el sentido mismo del “desarrollo” prometido.

Conclusiones

La Iniciativa de Infraestructura para la Región Sudamericana ha recibido el apoyo de todos los gobiernos de la región, así como de varios organismos empresariales interesados en las oportunidades de desarrollo de infraestructura productiva, inserción en “cadenas globales de valor” y negocios que han surgido de la construcción misma de los proyectos de infraestructura. Sin embargo, en varias ocasiones la realización de algunas obras puntuales ha despertado oposición por parte de comunidades indígenas, movimientos sociales y sindicatos a causa del impacto socioambiental que estas tienen. Esto ha llevado a un “silenciamiento” y una “despolitización” de la iniciativa (Cortés, 2014). Por un lado, de forma creciente los gobiernos de la región han intentado relacionar las obras con planes nacionales de infraestructura o acuerdos bilaterales con Brasil desligados de la iniciativa regional (Dávalos González, 2009). Por el otro, ha habido un esfuerzo para desvincular las obras de un proceso social y político más



amplio, es decir la reorganización territorial del continente según una racionalidad de mercado.

Asimismo, si bien la protesta social ha llevado a la cancelación de algunas obras, no ha producido un cuestionamiento global de la iniciativa, respaldado por una sólida acción colectiva transnacional.

Con respecto a esto avanzamos algunas hipótesis preliminares. En primer lugar, esto se puede relacionar con las dificultades tradicionales experimentadas por los movimientos sociales a la hora de internacionalizar sus luchas, debido a varias cuestiones, entre las cuales se encuentran la escasez de herramientas materiales y organizativas y las diferencias políticas y culturales a nivel nacional. Es interesante observar, sin embargo, que la ausencia de un “contrincante” materializado en un respaldo internacional de la iniciativa por parte de otros organismos de la sociedad civil, como por ejemplo las cámaras empresariales, ha permitido que los casos puntuales de oposición a la obra de la IIRSA ganaran visibilidad más allá de las fronteras nacionales, determinando la estrategia de “silenciamiento” generalizada adoptada por los gobiernos de la región. De este diagnóstico se desprenden además dos cuestiones. La primera es que la orientación de los movimientos sociales a oponerse a una obra en particular, sin poder vincularla a un eje de la IIRSA o a la iniciativa, puede haber dificultado su “traducción” a otros contextos nacionales afectados por obras similares o conectadas. Al mismo tiempo, y esta es la otra cuestión, la estrategia de “silenciamiento” ha obstaculizado este proceso de traducción porque ha logrado en gran parte evitar que los debates nacionales vinculados a la IIRSA adquirieran un carácter transnacional que identificara a la iniciativa en su complejo y el rol del Estado brasileño o de las IFI en ella.

Finalmente, incluso en los casos en los cuales las luchas originadas por una obra puntual han logrado aglutinarse con otras y elaborar un discurso orgánico que cuestione globalmente la iniciativa, esta acción ha sido ineficaz por la ausencia de un “enemigo” claro. Si bien a partir de 2011 la UNASUR ha sido la institución clave en la promoción de la IIRSA, y las IFI y el BNDES a través de ella, la crisis de las instituciones sudamericanas en el ocaso del “giro a la izquierda”, por un lado, y el debilitamiento del rol de los entes financiadores originales frente a nuevos actores como el Banco de Desarrollo chino, por el otro, han socavado la posibilidad de disputar el sentido y la realización de la IIRSA en los ámbitos de la gobernanza sudamericana en los cuales la iniciativa había sido diseñada.



Notas

¹dcllemente.cbta@gmail.com. FLACSO/UBA/CONICET

Bibliografía

Agostinis, G. y Palestini (2014). "Constructing regionalism in South America: the cases of transport infrastructure and energy within UNASUR." EUI working paper RSCAS 2014/73.

Alem, A. C., & Cavalcanti, C. E. (2005). "O BNDES e o apoio à internacionalização das empresas brasileiras: algumas reflexões." *Revista do BNDES*, 12(24), 43-76.

Cabrera, F. R., (2015a). La inversión brasileña en el Perú: La necesidad de reforzar el control en un contexto crítico para la rendición de cuentas.; en Vega, G. C., Hildalgo, S. J., Molina, S., Cabrera, F. R., & Torres, V. *La crisis de Petrobras y las constructoras brasileñas en el escenario latinoamericano* (pp. 17-19). La Paz: Coalición regional por la transparencia y la participación.

Cabrera, F. R., (2015b). La evaluación ambiental y social con enfoque estratégico: una herramienta en desarrollo en COSIPLAN. En Molina, S., Vega, G. C., Hildalgo, S. J., Torres, V., & Cabrera, F. R. *De IIRSA a COSIPLAN Cambios y continuidades* (pp. 17-19). La Paz: Coalición regional por la transparencia y la participación.

Cadena Chicunque, O.H., (2013). *Conflicto socio-ambiental en torno a la construcción de la variante San Francisco–Mocoa. Caso comunidad indígena kamentsa sibundoy-putumayo*. (Tesis de especialización en gerencia social). Centro de estudios e investigaciones latinoamericanas Ceilat-Universidad de Nariño.

Ceceña, A. E., Aguilar, P. y Motto, C. (2007). *Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)*. Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

Cortés, E. J. (2014). *Dilemas ecoterritoriales de la integración regional: IIRSA en las sociedades de Bolivia y Chile*. (Informe Proyecto Becas de Investigación CLACSO-Asdi).

Couto, L. F. (2008). "A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana–IIRSA como instrumento da política exterior do Brasil para a América do Sul". *OIKOS*. 5(1).



Cox, R. W. (1987). *Power and World Order. Social Forces in the Making of History*. New York: Columbia University Press.

Dávalos González, J. G. (2009). *La iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) en Ecuador desde un enfoque de derechos humanos: el caso del proyecto del eje multimodal Manta-Manaos*. (Tesis de maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.

Durand, F., y Campodónico, H. (2010). *Poder empresarial y sociedad civil en Sudamérica: entre el diálogo y el enfrentamiento*. Lima: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo.

Fonseca da, C. A. (2015). "Presença Empresarial Brasileira na América do Sul: Implicações para a Política Externa." *Cadernos de Política Exterior*, 195.

Germain, R. D. and M. Kenny. (1998). 'Engaging Gramsci: International Relations Theory and the New Gramscians' *Review of International Studies*, 24(1): 3–21.

Gonçalves, C. W. P., y de Araújo Quental, P. (2012). "Colonialidade do poder e os desafios da integração regional na América Latina". *Polis: Revista Latinoamericana*, (31), 295-332.

Kan, J. (2015). *La integración Desde arriba. Los empresarios argentinos frente al MERCOSUR y el ALCA*. Buenos Aires: CICCUS-Imago Mundi.

Molina, S. (2015). El papel de las instituciones financieras internacionales (IFIS) en la consolidación de IIRSA/ COSIPLAN. En Molina, S., Vega, G. C., Hildalgo, S. J., Torres, V., & Cabrera, F. R. *De IIRSA a COSIPLAN Cambios y continuidades (pp.3-6)*. La Paz: Coalición regional por la transparencia y la participación.

Razeto, C., Soto, D., y Marconi, A. (agosto 2009). Pascua-Lama, IIRSA: acumulación por desposesión. El imperio contraataca. En *XVI Foro Estudiantil Latinoamericano de Estudiantes de Antropología y Arqueología (FELAA)*, Coroico, Bolivia.

Romegialli, M. (2007). Los corredores bioceánicos en el contexto sudamericano: las potencialidades del eje interoceánico central. En *III Encuentro del Centro de Reflexión en Política Internacional (CERPI)-I Jornadas del CENSUD*, La Plata.

Rupert, M. (1995). *Producing Hegemony: The Politics of Mass Production and American Global Power*. Cambridge: Cambridge University Press.



Saguier, M. (2012). Socio-environmental regionalism in South America: Tensions in new development models. In Tussie, D. & Riggiozzi, P. (Eds.), *The Rise of Post-Hegemonic Regionalism* (pp. 125-145). Springer Netherlands.

Thwaites Rey, M. (2010). El Estado “ampliado” en el pensamiento gramsciano. En Thwaites Rey, M. *Estado y Marxismo: Un Siglo y Medio de Debate*.

Torres, V. (2015). El limitado y nocivo concepto de integración regional en Suramérica desde la perspectiva de la IIRSA. En Molina, S., Vega, G. C., Hildalgo, S. J., Torres, V., & Cabrera, F. R. *De IIRSA a COSIPLAN Cambios y continuidades* (pp.15-6). La Paz: Coalición regional por la transparencia y la participación.



Lo que quieren los colectivos de familiares de migrantes desaparecidos frente lo que quiere la sociedad civil que les acompaña.

Gabriela Martínez Castillo

Resumen

Desde 1998, personas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua quienes han perdido a algún familiar en la ruta migratoria hacia Estados Unidos se han organizado en Comités para potenciar su capacidad de búsqueda y de exigencia de verdad, justicia y reparación integral. Recolocar la desaparición de migrantes como un problema político en la agenda transnacional y situar la discusión en los Estados como responsables y agentes activos de la problemática ha convertido a estos colectivos en foco de atención de actores solidarios como periodistas, investigadores, ONG, agencias de cooperación, organismos humanitarios.

El objetivo de esta ponencia es justamente examinar el ensamblaje de dichos actores solidarios que si bien tienen un mismo objetivo, difieren en sus intereses y agendas, lo que genera luchas por ser quien definirá las estrategias de búsqueda y exigencia de justicia que los Comités y familias lleven a cabo. Al mismo tiempo se describirán las formas en que las organizaciones de base resisten y negocian ante las sugerencias e imposiciones que vienen junto con los financiamientos, favores y asesorías que reciben de los solidarios.

Se explicarán las tensiones a partir de dos conflictos concretos: a) la confrontación entre los objetivos humanitarios y de reconstrucción del tejido social que mueven a las familias frente a los objetivos de judicialización de casos que guían la práctica de la mayoría de actores solidarios relacionados con este tema. Y b) a través del análisis de las divisiones que provoca el discurso de derechos humanos en las organizaciones de base.

Palabras clave

Crítica a los derechos humanos; Movimientos de familiares de migrantes desaparecidos.

Migración y violencias

Los flujos procedentes de Centroamérica (CA) y que atraviesan México se diferencian de otros en Latinoamérica (LA) por los cambios tan rápidos en el perfil de los y las migrantes, en sus estrategias de movilización y por las violencias a las que se enfrentan. En cuanto al perfil, aumentan los refugiados, los retornados con varios intentos, las mujeres, en 2019 el número de menores creció 73% y el de familias 400% en



comparación con 2018 (SJM-CA&NA, 2019). Sobre las estrategias de movilización, mientras que tradicionalmente habían usado sólo la invisibilización, ahora también recurren a la hipervisibilización a través de caravanas para caminar con mayor seguridad. Estos migrantes son quienes se enfrentan a las políticas migratorias más restrictivas de LA; por ejemplo, a pesar de que el flujo venezolano es el más numeroso del mundo, éste ha sido acogido –no sin dificultades– por los países de destino, mientras que el de CA, aun siendo mucho menor, se enfrenta a un recorrido militarizado, bajo el control de violentos grupos de crimen organizado y a un sistema de refugio/asilo que apuesta por desgastarlos. También son quienes proceden y transitan por la región sin conflicto armado reconocido más peligrosa, Honduras y El Salvador se disputan la tasa anual de homicidios más alta en el mundo. En México hay más de 40 000 desaparecidos, 100 000 asesinatos violentos y desde 2011 casi 9 000 000 de desplazados forzados internos (Pérez, et. al., 2018). Las mujeres y niñas son particularmente violentadas, en 2019 en Honduras cada 17 horas una mujer es asesinada y cada día por lo menos una desaparece, en México 9 son asesinadas al día.

Desaparición forzada

Los usos y sentidos de la desaparición forzada se han ampliado. A la tradicionalmente implementada por elementos estatales y paraestatales para el control de la disidencia política, se suma la desaparición forzada como tecnología de terror para el control de los territorios, flujos migratorios y recursos naturales. El contexto excede los marcos teóricos desarrollados a partir del análisis de la desaparición de personas durante las dictaduras del Cono Sur y la Guerra Sucia en México, especialmente puesto que: a) no hay un perfil único de desaparecido/a; b) porque las violencias actuales dificultan documentar los vínculos entre las desapariciones y agentes del Estado, complicando aún más la búsqueda de justicia pues los casos no encajan en las leyes que define la desaparición forzada como tal por la comisión, omisión o aquiescencia del Estado; y c) porque a diferencia de los desaparecidos políticos, cada vez hay más evidencia de que desaparecidos/as actuales están siendo reclutados/as para la explotación sexual y laboral (Aluna, 2015), y que en las cárceles y centros de detención migratorios dejan a los migrantes incomunicados (SJM-CA&NA, 2019). Surge entonces la necesidad de ampliar las estrategias de búsqueda, no sólo recurrir a las forenses sino también a las que encuentren a las y los desaparecidos que están con vida.



Familias

las familias de migrantes desaparecidos comparten similitudes con los colectivos de los 70 y 80, son espacios construidos principalmente por mujeres, hermanas, esposas, sobrinas, hijas, pero sobre todo madres, quienes echan mano de los recursos simbólicos que da dicha identidad para construir la presencia de sus ausentes a través de la exigencia de verdad, memoria, justicia y reparación; que también incluye a familiares hombres quienes encuentran en la identidad de “madres” un concepto lo suficientemente amplio para sentirse representados. Por supuesto, también hay diferencias, por ejemplo, especialmente en Honduras, las familias han estado expuestas a tales niveles de violencia que la desaparición no siempre puede ser atendida como prioritaria pues constantemente están en medio de emergencias (Varela, 2012). Las familias que hacen búsqueda están expuestas a la extorsión, amenazas, agresiones, desplazamiento forzado e incluso asesinatos. Y como ya se explicó, la desaparición de migrantes exige construir mecanismos y conceptos de justicia transnacional o móvil que incluyan herramientas forenses y búsqueda en vida.

Familiares y organizaciones civiles han logrado importantes avances en la búsqueda, acceso a la justicia y visibilización de la problemática; sin embargo, en la academia, la desaparición sistemática de migrantes en tránsito por México y en EEUU está casi ausente. La magnitud de la crisis humanitaria hace necesario sumarnos a la reflexión y desde aproximaciones que generen espacios para construir análisis en colaboración con los migrantes que puedan, sus familias y actores solidarios.

Aunque se reconoce que también hay migrantes de otras nacionalidades que desaparecen, esta investigación se centra en los colectivos hondureños Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), Amor y Fe y La Guadalupe, y en el salvadoreño Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide).

Los hondureños resaltan porque a pesar de que no cuentan con un pasado de movilización social, es ahí donde surgen los primeros colectivos en este tema que forman redes transnacionales de búsqueda y denuncia. Cofamide sobresale por su visión de entretenerse no sólo con otros familiares de migrantes desaparecidos de la región, sino también con organizaciones salvadoreñas que buscan personas que desaparecieron durante el conflicto armado o que han desaparecido por la violencia política actual; al mismo tiempo, se vinculan con organizaciones de migrantes



retornados, grupos feministas y de lucha por los derechos LGBTTI, lo que les ha permitido aumentar su peso político y esbozar críticas a las medidas de reparación del daño enfocadas a casos individuales.

La mutación de la desaparición forzada y el endurecimiento de las políticas migratorias securitizantes configuran a CA, México y EEUU como el único corredor migratorio de LA donde migrantes desaparecen sistemáticamente, lo que demanda mayor atención y desarrollo de investigaciones específicas que tejan los aprendizajes del pasado sin perder de vista las singularidades actuales.

Desarrollo del tema

Son muchas las perspectivas desde donde se han hecho críticas al uso hegemónico de los derechos humanos y que nos recuerdan que al ser una herramienta pueden ser usados tanto para la emancipación como la opresión, y que el discurso de derechos humanos en sí mismo no tiene un potencial liberador, éste surge –si llega a ser el caso– de la utilización que las personas y grupos hagan de ellos.

Dos investigadoras mexicanas se han dado ya a la tarea de analizar el tema aquí planteado. Amarela Varela (2015) lo hace desde el ser “migrante” de los desaparecidos, ella plantea que los tratados y convenios internacionales que garantizan la protección de los migrantes encuentran sus límites cuando se enfrentan a las leyes de seguridad nacional, y esta tensión es la que impide que los derechos humanos de los migrantes se hagan efectivos y es la que construye corredores donde la violencia y la desaparición se han vuelto cotidianas, como es el caso de Centroamérica, México y EE UU. Este análisis reconoce dos actores principales en la contienda, el Estado y la sociedad civil, quienes configuran el uso de los derechos humanos a partir de sus enfrentamientos, negociaciones, presiones, etc. La autora afirma que las familias se han apropiado de los discursos de derechos humanos (derecho a migrar, a no migrar, a hacerlo de manera segura) y que éstos sí agrupan las demandas de las familias.

Por otro lado, Carolina Robledo (2016, 2017) cuestiona a los derechos humanos desde la “desaparición”, ahí encuentra que la realidad mexicana está desbordando los conceptos clásicos que se construyeron durante las dictaduras del Cono Sur y la Guerra Sucia en México, resalta la necesidad de vernaculizar los conceptos, modificarlos para que respondan a las circunstancias actuales/regionales. Menciona también las tensiones que esto provoca dentro de la sociedad civil; por ejemplo, entre quienes exigen que las leyes contra la desaparición forzada en México tengan que asumir a todos los casos como desaparecidos forzados hasta que las investigaciones del Estado



comprueben lo contrario; frente a quienes plantean la importancia de distinguir entre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares, pues de otra manera se desvanecería la responsabilidad del Estado. O entre aquellos que consideran que la responsabilidad de la búsqueda es del Estado, por lo tanto, el papel de las familias debe ser únicamente presionar a las autoridades para que hagan su trabajo y que es fundamental que se involucren en procesos de exigencia de justicia y no sólo de búsqueda; frente a aquellos que consideran que las familias tienen el derecho de encabezar las búsquedas con o sin el apoyo del Estado y que dadas las condiciones de violencia e inseguridad no se puede exigir que todas las familias integren en sus exigencias el castigo a los culpables.

Mirar los derechos humanos desde la “desaparición” agrega complejidades a las ya planteadas por el análisis desde la “migración”, muestra que si bien las familias se han apropiado del discurso de derechos humanos éste resulta insuficiente para narrar y acoger todas sus exigencias; revela que la sociedad civil no es un grupo homogéneo y que hay disensos entre ONG y familias de desaparecidos; es una visión que relativiza la centralidad del Estado pues recuerda que los derechos humanos son resultado de luchas políticas y como tales pueden modificarse cuando la realidad lo exija, en lugar de asumirlos como algo fijo y obligar a que las familias encajen sus casos en lo ya establecido.

Estas tensiones entre diferentes actores de la sociedad civil y la forma en que las familias las manejan fue justamente uno de los temas que Cofamide -y varios Comités hondureños- resaltaron como más importante durante los espacios de análisis colectivo que construimos juntos. Este tema es particularmente significativo para ellas y ellos pues, mientras que para otras familias con desaparecidos las redes internacionales fueron/son una herramienta de apoyo para presionar a los gobiernos locales, en este caso, tejerse en redes transnacionales se vuelve el único recurso disponible para hacer búsquedas en un país al que no tienen acceso debido a las estrictas leyes migratorias y para exigir justicia a un gobierno del que no son ciudadanos.

Las relaciones con ONG, financiadoras, organismos humanitarios, académicos, periodistas y demás actores solidarios que tienen acceso a los territorios donde los migrantes desaparecieron y a aquellos gobiernos, automáticamente se colocan con mayor poder que los Comités, y en ese desequilibrio de fuerzas es donde se disputan la legitimidad para establecer las estrategias que las familias “deben” seguir; mientras que para los Comités la búsqueda de personas y apoyar estrategias de reconstrucción



del tejido social es tan o más importante que los objetivos de judicialización e incidencia legislativa, para los actores solidarios éstas últimas son las acciones que más respaldan y financian, llegando a poner como condición a su apoyo que las familias participen en dichos procesos.

Ante la falta de apoyo y financiamiento para las acciones de búsqueda y de reconstrucción del tejido social, las familias han ido construyendo sus propias estrategias. Para empezar, no consideran que la búsqueda y la judicialización sean posturas excluyentes, al contrario, son complementarias y desde ahí tratan de construir un acompañamiento integral que incluya trabajar en ambos procesos de manera paralela, aunque reconociendo que para la búsqueda cuentan con menos recursos pues son pocos los actores solidarios que la apoyan.

Desde lo posible, consideran que uno de los aportes más significativos para la búsqueda es la documentación exhaustiva de los casos, pues saben que entre más información crecen las posibilidades de que se encuentre al migrante. Al mismo tiempo que han fortalecido estrategias de búsqueda a distancia, que por lo menos presenta la posibilidad de descartar/encontrar en cárceles, estaciones migratorias, hospitales, centros psiquiátricos, morgues, albergues. Consiste en hacer contacto vía correo electrónico o teléfono con los funcionarios que trabajan en dichas dependencias y pedirles que hagan la búsqueda de ciertos migrantes que pudieran estar o haber pasado por ahí; también incluye mandar información del caso a otras organizaciones de la sociedad civil y colectivos de ayuda para que puedan echar manos de sus recursos y buscar.

Sobre las medidas de no repetición y de prevención surge la misma controversia que con la búsqueda: ¿hasta dónde la intervención de las familias es quitarle responsabilidad al gobierno? Las familias la resuelven también sumando en lugar de tratar de imponer una u otra. Consideran que hay medidas de prevención que dependen del gobierno y otras de las familias, estas últimas también tienen que revisar por qué se perdieron sus migrantes, por qué no existieron las condiciones para que les compartieran sus planes de migrar, qué los llevó a irse. Las relaciones familiares son muy complejas, muchas veces “la familia llega a ser la institución más violenta” (Scheper-Hughes y Bourgois, 2004), y aunque este abuso tiene orígenes estructurales no es sólo responsabilidad del gobierno generar condiciones diferentes, también los ciudadanos tenemos la obligación de cuestionar de qué forma alimentamos las violencias y cómo podemos resistir y transformarlas.



Cofamide propone que de manera respetuosa y sensible se generen espacios que logren integrar una reflexión entre la responsabilidad que tienen las familias en la migración de su ser querido y cómo eso se entreteje con las condiciones de exclusión, precariedad y violencia estructural. Es fundamental que no se genere culpa, pues ésta inmoviliza, sino promover un análisis que permita idear estrategias de lucha que se puedan implementar tanto en los espacios íntimos como en los públicos. Una propuesta ha sido trabajar recomendaciones para las familias con migrantes, darles consejos para evitar la desaparición o para que sepan qué hacer en caso de que algún familiar desaparezca. Algunos Comités también reparten formatos sencillos para que las familias lleven una bitácora del viaje de sus migrantes (lugar y dirección de última llamada, descripción del paisaje, nombre de las personas con las que viaja, cuándo y por dónde piensa continuar, y demás datos fundamentales para la búsqueda). También difunden información sobre las formas en que los migrantes desaparecen, para que otros y otras puedan estar atentas a estas señales. Son consejos que pueden parecer muy básicos, pero que ayudan a que los migrantes vayan mejor preparados a un viaje peligroso que está lleno de mitos.

Sobre los procesos de acceso a la justicia, uno de los retos más fuertes es que los procesos de exigencia de justicia a través de vías jurídicas tienen tiempos específicos que no todos los familiares pueden seguir, entonces se dejan atrás a aquellos que no tienen las habilidades culturales y educativas para poder entender rápidamente cómo funciona el sistema de justicia, qué es un expediente, cuáles son sus derechos. Esto es un reto porque entonces los menos privilegiados afuera, quedan también, dentro de los Comités, excluidos de la posibilidad de participar más activamente y dejar de ser sólo beneficiarios.

En este mismo orden de ideas, la toma de decisiones y construcción en colectivo lleva mucho más tiempo que los procesos jerárquicos de las ONG, financiadoras y gobierno, es por eso que muchas veces para mantener ese ritmo se sacrifica la toma de decisiones colegiada y el consenso. Las ONG no reconocen que sus procesos provoquen esto dentro de los Comités y seguir en la absoluta negación sólo profundiza las divisiones dentro de los grupos.

Ser víctima es una circunstancia, y convertirse en sujeto político o defensor de derechos humanos a partir de la violencia que se ha sufrido es resultado de un proceso de formación y participación técnica y política. En este sentido, la oferta de capacitaciones que reciben los comités son sobre todo temas técnicos, no se les acompaña para



potenciar una reflexión política. Ejemplo de esto es la ausencia de análisis de la realidad, no se puede ser estratégico si no se sabe qué está pasando en el mundo, la región y nuestro país; o la necesidad de que no sólo sepan registrar sino documentar, pues esto es la piedra angular para cualquier estrategia de incidencia.

Falta hablar abiertamente sobre el hecho de que las financiadoras y las ONG tienen intereses específicos en el tema, y que no siempre coincide con el de las familias. En el mismo espíritu de aclarar cuáles son los roles de cada actor, también es importante que las ONG y los financiadores expliquen cuál es su apuesta política. Por lo visto, su estrategia es concentrarse en luchar contra la impunidad y promover la correcta procuración de justicia, pero la imponen como si fuera la única alternativa, cuando en la realidad es sólo una de varias posibilidades que tiene ventajas y también desventajas. Aunque la procuración de justicia es fundamental para acabar con las desapariciones no se pueden dejar de lado las exigencias para contrarrestar la precariedad, exclusión y violencia que obliga a las personas a migrar forzosamente y a un sistema racista y clasista que le impide el acceso a la justicia a las familias más pobres.

Lo anterior es importante porque las familias entienden la exigencia de justicia de una manera más amplia, no es sólo el castigo a los culpables sino reflexiones sobre la pobreza y violencia que los expulsa, la precariedad en la que se quedan si quien desaparece era el sostén, la vulnerabilidad de las mujeres en el tránsito y en el lugar de origen, abuelas que se quedan con nietos, etc, así como pensar en qué hacer con los culpables más allá de encerrarlos en cárceles. Los solidarios imponen su forma de pensar el acceso a la justicia y excluyen lo que las familias consideran, limitando sus posibilidades de acción y exigencia. La vía jurídica es una alternativa, no la única y ni siquiera la más importante. Mediante determinar qué actividades se financian y cuáles no, las financiadoras y las ONG ejercen este control sobre las familias y los talleres terminan siendo espacios de adoctrinamiento para que las familias memoricen los discursos de derechos humanos.

Existe una idea generalizada desde la corriente de los derechos humanos de que llegar a las causas estructurales de las problemáticas es exigir y presionar al Estado para que haga efectiva la procuración de justicia, y que el origen de las violaciones sistemáticas de derechos humanos es la impunidad de los crímenes del pasado que ha permitido la de los del presente. Sin embargo, hasta el propio Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en su visita a El Salvador vio la necesidad de ampliar nuestras preguntas, insistiendo en que el origen de los problemas no son sólo



ineficacias del gobierno, sino prácticas económicas y culturales que perpetúan la violencia y jerarquizan el valor de las vidas.

Si lo político es modificar las relaciones de poder (Gledhill, 2015), habría que cuestionar qué de las prácticas de las ONG y financiadoras generan espacios para que las familias ejerzan su poder y cuáles funcionan para que los intermediarios tengan más poder y sean más indispensables.

Bibliografía

Gledhill, John (2015). "Seguridizar, reprimir, pacificar: una crítica de las nuevas guerras en América Latina", en Valladares de la Cruz, Laura Raquel (coord.), *Nuevas violencias en América Latina. Los derechos indígenas ante las políticas neoextractivistas y las políticas de seguridad*. Biblioteca Alteridades, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 31-62.

Pérez, et. al, (2018). *Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México*. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Robledo, Carolina (2016). "Genealogía e historia no resuelta de la desaparición forzada en México", en *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*, núm. 55, pp. 93-114.

Robledo, Carolina y Garrido, Susana (2017). "Vidas precarias en tránsito: sin tierra para el llanto", en *Desacatos* 53, enero-abril, pp. 150-167.

Scheper-Hughes, Nancy y Bourgois, Phillippe (eds.) (2004). "Making sense of violence" en *Violence in War and Peace: an anthology*. Willey-Blackwell Publishing.

SJM-CA&NA (2019). *Caracterización de los flujos migratorios centroamericanos y de la desaparición de migrantes*. Informe interno presentado a los miembros de la Red.

Varela, Amarela (2012). "Del silencio salimos: la Caravana de madres hondureñas en México. Un ejemplo de resistencias en clave femenina al régimen global de fronteras", en Aquino Moreschi, Alejandra, Décosse, Frédéric y Varela, Amarela (coords.). *Desafiando fronteras: control de la movilidad y experiencias migratorias en el contexto capitalista*. Sur + Ediciones- Frontera Press, pp. 175-186.

Varela, Amarela (2015). "Caravana de Madres Centroamericanos, un ejemplo de las nuevas luchas migrantes", en Vázquez y Estévez (coord.). *Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia*. UNAM/FLACSO, pp. 315-352.



Da “movimentação” ao mandato: as inovações democráticas das “Muitas” e da “Gabinetona”.

Flávia de Paula Duque Brasil
Fernando Resende Anelli
Rodolfo Pinhón Bechtluft

Resumo

As “Muitas pela cidade que queremos” surgem em Belo Horizonte, em março de 2015, com o intuito de agregar atores de diversos movimentos e coletivos sociais a fim de construir candidaturas coletivas para disputar as eleições municipais de 2016. A construção da proposta ocorreu principalmente em reuniões abertas realizadas em diversos espaços públicos da cidade, com o objetivo de debater temáticas setoriais, nas quais os principais coletivos que compuseram a iniciativa tinham maior incidência. As candidaturas foram concentradas em um partido progressista que abrigou a proposta, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Com o slogan de campanha “votou em uma, votou em todas”, foram lançadas doze candidaturas para vereança, marcadas por diversas pautas progressistas e pela representatividade dos marcadores sociais de gênero, raça e orientação sexual. Foi possível eleger duas vereadoras, sendo que uma delas foi a mais votada do município para o pleito. Ao assumirem o cargo, propuseram uma série de inovações democráticas, construídas na “Gabinetona”, um gabinete conjunto das vereadoras, com uma equipe única. Este trabalho tem como objetivo compreender quais foram as inovações democráticas, como foram construídas ao longo da trajetória das “Muitas” e como puderam oxigenar a institucionalidade. Ressalta-se a criação dos Laboratórios Populares de Leis, que visam à elaboração conjunta de projetos de lei com cidadãos e coletivos interessados; a criação do grupo de teatro “AzDiferentonas”; os balanços abertos do mandato coletivo, realizados periodicamente em diferentes espaços públicos; o fundo “Cê Fraga”, composto por doações de parte dos salários das parlamentares com objetivo de financiar iniciativas sociais e culturais do município; dentre outras iniciativas.

Palavras chave

Movimento social; Inovação democrática; Participação social; Representação; “Muitas”.

Introdução

Com objetivo de construir uma “plataforma de ocupação cidadã na política”¹ nas eleições municipais de 2016, destaca-se na cena de Belo Horizonte, em 2015, uma iniciativa



coletiva que posteriormente viria a receber o nome de “Muitas pela Cidade que Queremos”, doravante “Muitas”. De maneira geral, os participantes eram provenientes de diversos grupos, coletivos e movimentos sociais com atuação na cidade, além de ativistas independentes, que transitavam pelas lutas e pautas que compunham um campo efervescente no cenário político local na presente década. Dessa forma, as “Muitas” vão se construindo a partir do desejo desse grupo de ativistas de lançar candidaturas às eleições municipais e ocupar a institucionalidade no intuito de materializar as reivindicações que há anos vinham sendo endereçadas ao poder público.

A construção dessa proposta ocorreu principalmente em reuniões abertas, realizadas em diversos espaços públicos da cidade, que buscaram debater temáticas setoriais, além de princípios gerais de atuação e estratégias políticas. Nestes encontros, seus principais valores, ideias e propostas foram sendo discutidos e consolidados. Ao buscar definir a identidade coletiva das Muitas, os participantes entrevistados por essa pesquisa apontaram alguns pilares que embasaram essa construção e a plataforma das candidaturas. Dentre eles, pode-se citar a radicalização da democracia, o ideal municipalista com uma política voltada para o cotidiano da cidade, a confluência máxima no campo progressista, a redução de privilégios e a representatividade de grupos minoritários na política - mulheres, negros, indígenas, LGBTIQs², dentre outros.

A participação das candidaturas das Muitas no processo eleitoral envolveu filiações dos participantes, concentradas em um partido progressista que abrigou a proposta, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Com o slogan de campanha “votou em uma, votou em todas”, foram lançadas doze candidaturas para vereadores, marcadas por diversas pautas do campo progressista e pela representatividade dos marcadores sociais de gênero, raça e orientação sexual.

As Muitas conseguiram eleger duas vereadoras, sendo que uma delas foi a candidata mais votada do município. Do surgimento da proposta à eleição das vereadoras, as Muitas percorreram um percurso interessante e sem precedentes no cenário belorizontino, quiçá brasileiro. Para realizar o objetivo da radicalização democrática e os demais pilares mencionados anteriormente, uma série de experiências inovadoras foram criadas na “Gabinetona”, um gabinete parlamentar compartilhado entre as vereadoras, com uma equipe única e contato direto com movimentos, coletivos e ativistas que constroem diferentes lutas na cidade.

Este artigo tem como objetivo mapear, caracterizar e descrever as principais propostas inovadoras das Muitas, desde seu surgimento até a campanha eleitoral de 2016, bem



como no exercício do mandato, enquanto Gabinetona, até meados de 2019, buscando identificar como essas inovações oxigenaram a institucionalidade no âmbito da Câmara Municipal³.

O caminho metodológico adotado parte de uma brevíssima revisão bibliográfica em torno do conceito de movimento social, em diálogo com as autodefinições dos participantes das Muitas e com a sua ideia de “movimentação”. Outra linha de revisão focaliza o conceito de inovações democráticas, a partir dos esforços de Elstub e Escobar (2017) e de sua tipologia, que constitui uma referência para a abordagem das experiências inovadoras das Muitas e da Gabinetona. Já com o foco específico nas Muitas, efetuou-se uma revisão bibliográfica tendo em vista contextualizar o seu surgimento e trajetória, ao lado de um levantamento documental, principalmente em sites e plataformas relacionados à experiência em tela.

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com uma parlamentar e três ativistas, envolvidos diretamente com as Muitas e a Gabinetona⁴, concedidas aos autores a partir de seu grupo de pesquisa, que tem como objetivo mapear formas recentes de ação coletiva em Belo Horizonte. Também houve observação direta e, em alguma medida, observação participante, já que um dos autores participou ativamente da construção das Muitas nos anos de 2015 e 2016.

O contexto de construção das “muitas”

Para entender o contexto de surgimento das Muitas é necessário apresentar um panorama geral do conjunto de grupos, conflitos e reivindicações que moviam um campo político efervescente na cidade de Belo Horizonte, particularmente a partir do ano de 2009. Tal contexto é marcado pela atuação de movimentos sociais e de coletivos emergentes que, de modo geral, apresentam algumas características em comum: i) opõem-se a uma gestão pública municipal então refratária à participação social, que adotava políticas de higienização e um modelo de gestão essencialmente neoliberal; ii) buscam construções políticas mais autônomas e horizontalizadas, distanciando-se de formulações hegemônicas no campo da esquerda institucionalizada; e iii) suas pautas têm relação direta com a esfera local, com o direito à cidade e com a ocupação e ressignificação do espaço urbano (Domingues, 2019; Brasil, Carneiro, Silva & Bechtluft, 2017; Entrevistado A).

Dentre as ações coletivas que compuseram esse campo, destacam-se: iniciativas culturais, de caráter festivo e, ao mesmo tempo, disruptivo, tais como a “Praia da Estação”, o carnaval de rua e o hip-hop; a luta pelo direito à moradia e das ocupações



urbanas informais, com destaque para a atuação do “Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas” e das “Brigadas Populares”; os movimentos de defesa do meio ambiente urbano - “Salve a Mata do Planalto”, “Parque Jardim América” e “Fica Fícus”; o movimento “Fora Lacerda”, em oposição suprapartidária ao governo do prefeito Márcio Lacerda (2009-2016); a mobilização contra os impactos da Copa do Mundo de 2014; as reivindicações relativas ao gênero e sexualidade; e a luta pelo transporte público (Domingues, 2019; Brasil et al, 2017). Esse conjunto de movimentos e de pautas foi atravessado pelas manifestações que eclodiram em todo o país ao longo do mês de junho de 2013. Conforme aponta Domingues (2019), embora os protestos tenham se dado, em grande medida, de forma dispersa e descoordenada, eles também não ocorreram em um vazio político. Em Belo Horizonte, as chamadas “Jornadas de Junho” de 2013 permitiram que ativistas, grupos e coletivos se encontrassem e disputassem significados durante e após a ocorrência das manifestações. Nesse contexto, novas iniciativas surgiram e ganharam projeção na cidade, tais como a “Assembleia Popular Horizontal”, o movimento “Tarifa Zero BH”, que atua na pauta da mobilidade urbana; a ocupação, para fins culturais, do casarão que deu origem ao “Espaço Comum Luiz Estrela”; a disputa pelo uso político e cultural do espaço do Viaduto Santa Tereza e de outros espaços urbanos; a construção de redes de solidariedade contra os despejos nas ocupações urbanas, dentre outras formas de ação coletiva.

As Muitas surgem nesse contexto político e cultural, a partir da afluência e da conjunção de algumas pessoas que participavam das mobilizações existentes na cidade e que se dispuseram a participar efetivamente de um processo eleitoral, sendo que a maioria delas nunca havia sido filiada anteriormente a nenhum partido político. As narrativas dos Entrevistados A, B e C reportam esse momento inicial, dos primeiros encontros à tematização da representação e seus limites, que desembocaram na pauta de ocupar a política institucional:

[a movimentação] surgiu num contexto ...dessa retomada das esferas públicas mesmo que a gente viveu nas cidades ...eu acho que a gente teve momentos de um fluxo de distanciamento das cidades e na cidade de Belo Horizonte é muito forte essa retomada, mas em outras cidades também, e eu acho que junho de 2013 foi só uma fissura, um ápice disso, mas a gente teve em todas as cidades brasileiras mesmo uma retomada do protagonismo dos movimentos ambientais, de mobilidade urbana, o próprio carnaval de rua



...e acho que Belo Horizonte viveu isso de uma maneira muito particular e muito forte assim ..., e alguns desses grupos também com desejo de transformar a cidade a partir da institucionalidade (Entrevistado A).

...a gente fez aquele encontro que a gente deu o nome de uma tarde de sábado, março de 2015, mas a gente começa a se articular em 2014, um grupo de ativistas independentes que tinham se encontrado em algumas lutas da cidade sobretudo no 'Fóra Lacerda', nos movimentos da "Praia da Estação", do carnaval de rua, . . . a gente começa a perceber que a gente vinha se constituindo como uma força em Belo Horizonte que na época de eleição se diluía entre representantes que tinham limitações da representatividade, porque não eram nós e que estava na hora de a gente fazer uma ocupação institucional (Entrevistado C).

...teve um debate em uma das rodas das Muitas que foi lá na Praça Floriano Peixoto sobre a questão da representatividade e a gente falava das agendas dessa outra cidade, da cidade que nós queremos, que podia mobilizar vários temas integrados, né, da água à moradia passando por feminismos e radicalização democrática. Foram temas que nós abordamos nas Explosões Programáticas que nós fizemos em vários espaços, mas ainda não existia uma elaboração tão consequente sobre a ocupação dos espaços de poder quebrando hierarquias e privilégios a partir dos nossos corpos, das nossas diferenças e das nossas desigualdades também de gênero, raça, socioeconômicas, de território (Entrevistado B).

No intuito de ocupar a institucionalidade, o sucesso e a potência da iniciativa estão relacionados com a capacidade de articular pessoas que transitavam por um campo sociopolítico que reunia pautas progressistas, marxistas, libertárias, de inclusão de minorias e de combate às opressões.

Sobre o processo inicial de construção das Muitas, o Entrevistado A menciona outros dois elementos importantes para moldar a identidade do grupo: a memória de uma gestão popular vivenciada em Belo Horizonte em meados da década de 1990, com início no governo da Frente BH-Popular, encabeçada por Patrus Ananias, do Partido dos Trabalhadores (PT), e a inspiração advinda das plataformas municipalistas construídas na Espanha, como o "Ahora Madrid" e o "Barcelona en Comú", que conseguiram agregar diferentes movimentos sociais e ativistas, e que elegeram, em 2015, candidatos às prefeituras em várias importantes cidades da Espanha.

Em convergência com o formato mais autônomo e horizontal dos novos movimentos sociais de Belo Horizonte, as Muitas propuseram-se a experimentar novas formas de exercer a democracia, idealizando mandatos abertos, coletivos e participativos.



Inicialmente, foram realizados diversos encontros temáticos abertos, em diferentes locais da cidade, que receberam o nome de “Explosões Programáticas”. Dentre os temas abordados, pode-se citar as questões relativas a moradia, mobilidade urbana, áreas verdes, democracia, cultura e feminismo. Concomitantemente, o grupo desenvolveu uma plataforma colaborativa virtual similar às plataformas que foram utilizadas nas campanhas eleitorais da Espanha, com o objetivo de subsidiar a construção um programa de campanha colaborativo. Como o sistema eleitoral brasileiro não permite candidaturas sem partido, uma das frentes de atuação do grupo foi o diálogo e articulação com organizações políticas existentes na cidade. Após reuniões realizadas com membros do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), do Partido Comunista Brasileiro (PCB), do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e da Rede Sustentabilidade, optou-se coletivamente pela filiação ao PSOL-BH. Segundo os entrevistados A, B e C, essa escolha deu-se por afinidade política, por convergência programática das pautas defendidas pelo grupo e pela necessidade pragmática de se concentrar todas as candidaturas em uma única legenda, a fim de atingir o quociente eleitoral.

Nas eleições municipais de 2016 foram lançadas 12 candidaturas à vereadores em uma campanha coletiva que utilizou o slogan: “Votou em uma, votou em todas”. Vale lembrar que um dos princípios das Muitas era a representatividade de minorias políticas, isto é, construir candidaturas que dessem relevo aos sujeitos das lutas sociais, com corpos que expressassem a diversidade de gênero, raça, orientação sexual e territórios, em busca da paridade. Nesse sentido, é importante registrar que, das doze candidaturas, oito eram mulheres, com presença de candidatas negras, além de uma mulher trans e de uma mulher indígena.

O trabalho de campanha foi realizado de maneira integrada e coordenada por meio da criação de um “ateliê criativo”, no qual diversas pessoas trabalharam voluntariamente. Durante a campanha, outras pautas foram incorporadas à identidade do grupo, como a legalização da maconha e a luta antiprisional. Por fim, outra marca da campanha foi o questionamento a respeito dos privilégios dos políticos e, nesse sentido, todas as candidatas assumiram um compromisso - firmado em cartório - de doar parte de seus salários e abrir mão de algumas das verbas parlamentares, caso fossem eleitas. Dos 46 mil votos obtidos pela coligação PSOL-PCB, mais de 35 mil foram destinados às candidaturas das “Muitas” - votação suficiente para eleger duas candidatas, sendo uma delas a vereadora mais votada do município. Tendo em vista a proximidade de votos



recebidos pela segunda e terceira colocada na chapa, foi proposta uma experiência de “coverança”, em que a terceira candidata mais votada foi considerada, internamente, uma vereadora também eleita, compartilhando prerrogativas e responsabilidades com as demais.

“Muitas”: Movimento social ou “movimentação”?

Um dos primeiros desafios em se analisar a trajetória das “Muitas” é o seu enquadramento teórico-analítico. Em linhas gerais, há alguma similaridade da experiência com os esforços de conceituação e caracterização dos movimentos sociais, já que, em alguma medida, podem ser considerados “coletividades formadas por uma pluralidade de atores sociais, organizacionais e institucionais ligados em modelos de interação, com base em identidades compartilhadas, construídas através de relações de conflito e cooperação” (Carlos, 2011, p. 315-316) ou, como posto por Melucci (1996, p. 57), como “uma forma de ação coletiva:

(i) baseada na solidariedade, (ii) desenvolvendo um conflito, (iii) rompendo os limites do sistema em que ocorre a ação”, cabendo destacar a ênfase do autor nos processos de construção de identidades coletivas que se articulam à construção de significados compartilhados.

Na linha teórica dos novos movimentos sociais, Alonso (2009) destaca a orientação cultural, com referentes simbólicos e identitários, presente no feminismo, pacifismo, ambientalismo e no movimento estudantil, dentre outros. Dessa maneira, seriam antes grupos ou minorias que grandes coletivos e “recorreriam à ação direta, pacífica, baseada numa organização fluida, não hierárquica, descentralizada, desburocratizada” e se dirigiriam prioritariamente a mudanças culturais na esfera da sociedade civil (Alonso, 2009, p. 67). Na linha da teoria do processo político, Tilly (1978) introduz variáveis de análise como o “interesse” para se mobilizar, a “solidariedade” e as “oportunidades”, abordadas a partir do conceito de “estruturas de oportunidades políticas” (EOP), que seria um parâmetro político para se pensar as brechas, ou os contextos favoráveis, para a mobilização (Bringel, 2012). Também nesse campo teórico tem sido problematizado o fenômeno da institucionalização dos movimentos sociais⁵, tendo Tarrow (2009) como uma das referências centrais nos debates, em sua visão de ciclo dos movimentos sociais. Nessa perspectiva cíclica, o esvaziamento da dimensão mobilizatória e institucionalização se sucederiam à fase disruptiva dos movimentos sociais, implicando mudanças organizacionais no sentido de maior rotinização e formalização, ao lado de mudanças em seu repertório de ação. Carlos (2011, p. 320-



322) sublinha em Tarrow (2009, p. 134) o processo de institucionalização das táticas dos movimentos como “um caminho que frequentemente é bem-sucedido ao custo de transformar o movimento em um partido ou grupo de interesse”.

A revisão de Diani (2003, p. 200-319 *apud* Diani e Bison, 2010) caracteriza os movimentos sociais a partir de: i) sua “clara orientação para o conflito em relação a oponentes sociais e políticos”; ii) “densas redes organizacionais, por atores ligados por solidariedades e identidades compartilhadas”; e c) sua precedência e sobrevivência às coalizões e/ou campanhas específicas.

Diani e Bison (2010) buscam distinguir movimentos sociais de coalizões e organizações. Em sua discussão, no caso dos movimentos sociais, apontam para:

i) a construção e reprodução de redes informais; ii) a identidade coletiva; iii) o engajamento em conflito. A sua ação coletiva se orientaria para problemas coletivos e/ou expressão de valores. No caso das coalizões, os autores destacam que a aliança não apresenta o vínculo indelével forte, enquanto no caso das organizações – como exemplificado pelos partidos políticos – as redes informais são esparsas (se contrapondo às redes mais densas dos movimentos) e a identidade coletiva mostra-se relativamente mais fraca. No caso das organizações, destaca-se ainda a diferença em relação ao grau de formalização e o fato de que a ação coletiva ocorre referenciada a uma organização específica, conformada pelas normas e procedimentos estabelecidos.

Em maior ou menor medida, as Muitas encaixam-se nos corpos teóricos aqui descritos, referidos aos movimentos sociais, observando-se a perspectiva conflitual e a construção de redes informais, de significados compartilhados e identidades coletivas. Destaca-se, ainda, a discussão em torno da institucionalização como pertinente à abordagem das Muitas.

No entanto, os participantes entrevistados não se identificam com a noção de movimento social, reconhecendo-se e se auto definindo como uma “movimentação”, que se endereça à institucionalidade. Sobre essa caracterização das Muitas, duas das entrevistadas pontuam que:

...as Muitas foram muito mais um catalisador de uma vontade, de um sentimento, de um contexto, do que realmente um movimento, assim. Nunca li dessa maneira, tanto que a gente falava em movimentação para dar esse sentido mais fluido assim, porque é difícil precisar mesmo (Entrevistado A).



...o que nos aglutinou é um ideal municipalista. a gente se vê até hoje inclusive como uma movimentação, eu gosto de fazer essa diferenciação que eu acho inclusive que nós não somos um movimento ...É uma movimentação municipalista voltada para as demandas concretas da vida da população: mobilidade, ocupação do espaço público, feminismo, antirracismo, ...as pautas das mulheres, das populações negras, dos LGBTQs, dos povos e comunidades tradicionais, que aos poucos vão se aproximando, mas com uma proposta de resolutividade, de sair um pouco das grandes elaborações do campo progressista e até mesmo da macroeconomia e tal e vir para o cotidiano das cidades, o que vem afetando as pessoas. Isso são as pautas que nos aglutinaram, essas pautas mais imediatas da vida, da cidade, ocupações urbanas, cultura (Entrevistada C).

Marques (2019, p. 68) entende que as Muitas se conformam enquanto articuladoras e conectoras de movimentos sociais e experiências já existentes, promovendo uma convergência de pautas e de lutas:

É importante perceber como a elaboração das “Muitas” parte de uma perspectiva pragmático-teórica conectada com os movimentos e as resistências que já existiam nos territórios há anos. A “movimentação” propõe-se ao deslocamento das práticas articulatórias de maneira a promover conexões prováveis, mas que ainda não tinham sido viabilizadas em decorrência de estruturas de desmobilização e ruptura como as empregadas por Márcio Lacerda enquanto Prefeito de BH. As “Muitas” passam a colocar em prática metodologias de promoção de conexões e sistematização das pautas das lutas de maneira propositiva e programática, promovendo visibilidade e projeção de lideranças e projetos progressistas já legitimados e em andamento nos territórios.

Mais além, o entrevistado A enfatiza a plataforma de ocupação das eleições de 2016 como objetivo e, nesse sentido, aponta que as Muitas já surgem com o projeto de “ser essa interface dos movimentos sociais com uma institucionalidade”.

Ou seja, na perspectiva dos participantes entrevistados, as Muitas seriam uma proposta de construção de convergência – ou, como posto pela própria “movimentação”, de confluência máxima – de movimentos sociais já existentes e atuantes na cidade a partir de uma plataforma propositiva e com o objetivo claro de ocupação da institucionalidade através das eleições municipais. Conforme mencionado na seção anterior, para alcançar o principal objetivo proposto e construir uma proposta de radicalização democrática, uma série de propostas inovadoras foram criadas na trajetória das Muitas, e posteriormente, a partir da Gabinetona, que será abordada adiante.



Inovações democráticas

A conexão entre a perspectiva de aprofundamento ou radicalização da democracia nas trilhas da participação e da deliberação tem sido associada à perspectiva de experimentalismo democrático e de inovação. Nesse sentido, Santos e Avritzer (2002, p. 45-50) apontam para a articulação entre inovações sociais e inovações institucionais, associadas a novas formas democráticas.

Como mencionado na introdução, recorre-se à tipologia de “inovações democráticas” de Elstub e Escobar (2017), a ser desenvolvida nesta seção, para guiar a descrição e a categorização das experiências inovadoras propostas pelas Muitas e, posteriormente, pela Gabinetona. Ressalta-se que, de acordo com os autores, as inovações democráticas correspondem a um universo plural, tornando-se difícil uma caracterização geral. Além disso, há que se considerar que uma inovação democrática só pode ser assim considerada em relação ao seu contexto

– ou seja, há diferenças entre as democracias incipientes e as democracias consolidadas, por exemplo, e isto deve ser levado em conta na análise (Elstub e Escobar, 2017).

De acordo com a construção conceitual dos autores, as inovações democráticas referem-se aos “processos ou instituições desenvolvidas para reimaginar e aprofundar o papel dos cidadãos em processos de governança, ao aumentar oportunidades de participação, deliberação e influência” (Elstub e Escobar, 2017, p. 25).

Para a construção desse conceito de inovações democráticas e para a criação de uma tipologia, Elstub e Escobar (2017) desenvolvem um quadro de referências (*framework*) com elementos que podem ser integrados para desenvolver uma visão holística das experiências em análise, conforme demonstrado pela figura 1. No núcleo do *framework* estaria o conteúdo imprescindível (*ineliminable*) para as inovações democráticas, qual seja, “reimaginar e aprofundar o papel dos cidadãos em processos de governança” (ELSTUB e ESCOBAR, 2017, p. 14). Como conteúdos quase-contingentes (*quasi-contingent*) estariam quatro elementos, que podem ser encontrados em maior ou menor medida nas inovações democráticas: método de seleção dos participantes; forma de participação; forma de tomada de decisão; e extensão do poder e da influência. Por fim, elencam-se os conteúdos contextuais (*contextual features*): área de política pública (temáticas, como educação, saúde, segurança pública); nível de governança (local, regional/subnacional, transnacional, global); e o estágio do ciclo de políticas públicas (agenda, formulação, execução, monitoramento, avaliação).



Figura 1 . Framework para análise de inovações democráticas
 Fonte: Adaptado de Elstub e Escobar (2017, p. 21).

A partir dessa tipologia, os autores propõem cinco famílias ou categorias de inovações democráticas, conforme o Quadro 1.

Anexo 1: Quadro 1

A partir das cinco categorias elencadas, as inovações democráticas serão categorizadas e descritas em relação ao período das Muitas e, posteriormente, da Gabinetona, nos Quadros 2 e 3. Ressalta-se que foi utilizada a ideia geral presente em cada uma das categorias elencadas – dessa maneira, a descrição feita na última seção não necessariamente representa de maneira precisa e detalhada as experiências de inovações democráticas propostas e/ou implementadas pelas Muitas e pela Gabinetona, mas permitem uma ideia geral do que cada uma delas representa.

Anexo 2: Quadro 2

Como mencionado, há limitações na tipologia, de modo que as experiências que não se enquadraram foram categorizadas como “Outras”.

Anexo 3: Quadro 3

As inovações democráticas categorizadas nos Quadros 2 e 3 revelam uma multiplicidade de experiências, com objetivos e formatos diversos, o que evidencia que



o princípio da radicalização democrática se refletiu efetivamente na construção política das iniciativas tanto do período das Muitas quanto do mandato da Gabinetona. Ressalta-se, ainda, haver uma preponderância de experiências que criam espaços de participação presencial, com debate, discurso e argumentação - portanto, de deliberação -, em detrimento da participação virtual ou de métodos de agregação de preferências, como a votação. Das treze experiências listadas, nenhuma iniciativa foi categorizada como “referendo” e apenas uma delas foi categorizada como “participação digital”, sendo que ela foi utilizada somente no período das Muitas. Assim, aponta-se para uma tendência de que os processos políticos das Muitas e da Gabinetona sejam horizontais e presenciais, com prevalência de experiências de mini-públicos e de governança participativa/colaborativa, com práticas participativas e deliberativas.

Além das inovações democráticas levantadas, o princípio da radicalização democrática pode ser observado também nas relações e práticas cotidianas do exercício do mandato. Na opinião de uma das entrevistadas, a característica mais radical da Gabinetona está relacionada com a abertura e a porosidade do mandato aos movimentos sociais e às lutas da cidade. Ela afirma que:

...o principal da nossa radicalidade está no que às vezes é intangível, mas nessa porosidade que o mandato tem em relação às lutas da cidade, aos movimentos da cidade,

essa porosidade eu acho que é o mais radical que a gente tem da participação popular (Entrevistada C).

Em relação à capacidade de oxigenar a institucionalidade, pode-se afirmar que, apesar de terem formulado uma série de inovações democráticas, porosas às demandas dos cidadãos, há uma série de limites relacionados ao próprio exercício do poder por um gabinete no âmbito do Legislativo municipal. A esse respeito, uma das entrevistadas relata:

...a institucionalidade, ela também nos comprime para um lugar cada vez menos experimental, porque a dinâmica aqui é muito embrutecida e, se a gente não conseguir cobrir bem o funcionamento jurídico, de comunicação e outras coisas, a gente não sobrevive aqui. Então, eu acho que, de tempos em tempos, tem que surgir essas movimentações muito ousadas, desavisadas, que não conhecem o funcionamento por dentro, porque a nossa disposição para criar, para inovar, vai ser sempre muito maior até pela inexperiência (Entrevistada B).



Dessa maneira, apesar do grau de mobilização e do alcance popular das experiências criadas, com vários impactos práticos no cotidiano da Câmara Municipal, o fato de a institucionalidade ter uma cultura própria e uma lógica de funcionamento rígida acaba por frear a disseminação de propostas mais transformadoras e radicais, como as criadas pelas Muitas e pela Gabinetona.

Considerações finais

Buscou-se construir, com o presente trabalho, uma visão geral da experiência das Muitas e da Gabinetona. Na primeira seção foi feita uma contextualização da experiência municipalista, abarcando a conjuntura anterior ao seu surgimento, que pode ser considerada sob a chave de oportunidades políticas configuradas por um ciclo local (e nacional) de mobilizações. Tal contexto favoreceu o encontro e a mobilização de seus principais atores, a idealização e a construção inicial da proposta. Posteriormente, buscou-se construir uma caracterização da iniciativa enquanto movimento social e também como “movimentação”, conforme a conceituação proposta pelos ativistas envolvidos. Discutiu-se o conceito de inovações democráticas e a tipologia de Elstub e Escobar (2017), tendo em vista a sistematização das experiências das Muitas e Gabinetona a partir dessas chaves. Ressaltam-se dificuldades de enquadrar a diversidade de experiências, pontuando que não necessariamente as inovações democráticas guardam correspondência com as categorias propostas pelos autores, embora essas contribuam para a análise das práticas, em maior ou menor medida.

Em um balanço do experimentalismo e das inovações abordadas destaca-se que as Muitas – desde os processos de articulação e mobilização de atores, da construção de propostas e de sua plataforma, das suas práticas - podem ser compreendidas como processos de inovação social democrática que vem a irrigar as práticas na Gabinetona, engendrando inovações institucionais.

Ressalta-se que, para estudos futuros, é possível abordar a continuidade das experiências abordadas neste artigo. Mais além, a vitória eleitoral das Muitas nas eleições de 2018, tendo eleito uma deputada estadual e uma deputada federal, a partir do que se fundou a “Gabinetona Expandida”, implica novos acontecimentos e desdobramentos a serem mapeados e analisados.

Anexos

Categoria	Descrição e características
Mini-públicos	Fóruns de cidadãos, selecionados por meio de triagem, que passam por um intenso processo deliberativo em que os participantes se envolvem em expressão discursiva. O modo de tomada de decisão tende a ser a deliberação, mas pode combinar-se com outras formas. O nível de poder e influência é variável. Em termos



	de características contextuais, os mini- públicos têm sido utilizados em diversas áreas de políticas públicas, em fases do ciclo de políticas públicas e nos níveis locais, regionais, nacionais e transnacionais de governança.
Orçamento participativo	Processo em que os cidadãos podem participar na decisão da alocação de recursos públicos. Tende a ser aberto a qualquer pessoa. Um modo comum de participação é o voto. A audição e a expressão discursiva também desempenham papel importante. Em termos de nível de influência, o orçamento participativo tende a colocar os cidadãos como tomadores de decisão com autoridade direta ou em parceria, como parte de um arranjo de co-governança. Em termos de características contextuais, o orçamento participativo está tipicamente ligado ao nível local e à formulação e tomada de decisões sobre políticas e iniciativas urbanas.
Referendos e iniciativas cidadãs	Confiança na votação como modo principal de participação e tomada de decisão. A auto seleção aberta o torna um processo potencialmente altamente inclusivo. O nível de influência é variável, mas a maioria oscila entre plebiscitos consultivos e vinculantes. Não há limite teórico em termos do nível de governança, mas tende a ser usado como o estágio final de formulação de políticas e em questões de importância nacional. Esse conjunto de inovações democráticas inclui múltiplos casos de democracia direta em todo o mundo e reflete a ênfase mais recente em novos processos de legislação direta iniciados pelos cidadãos.
Governança colaborativa ou participativa	Uma das mais internamente diversas, incluindo desde fóruns públicos até parcerias colaborativas e acordos participativos que buscam assegurar a cooperação e a coprodução entre cidadãos, autoridades públicas e partes interessadas. Inovações de governança colaborativa tendem a acarretar auto seleção e/ou seleção intencional de participantes. Os modos predominantes de participação são a escuta e a expressão discursiva, com decisões geralmente tomadas através de barganha, negociação ou deliberação. O nível de influência pode variar. Esses novos arranjos de governança podem ser encontrados em várias áreas e estágios de políticas, bem como nos níveis locais, regionais, nacionais e transnacionais.
Participação digital	A participação digital pode abranger toda a gama de métodos de seleção, modos de participação e tomada de decisões e níveis de influência – embora os casos de autoridade direta sejam raros. É igualmente maleável em termos de área de política pública e nível de governança, e pode ser projetado para contribuir durante vários estágios de políticas, desde <i>crowdsourcing</i> até priorização e análise.

Quadro 1. *Categorias de inovações democráticas de acordo com Elstub e Escolar (2017)*
 Fonte: *Elaboração própria a partir de Elstub e Escobar (2017).*

Asociación Latinoamericana

Inovações	Descrição	Categoria
Explosões Programáticas	Ocorridas em diversos espaços públicos de diferentes regiões da cidade, o objetivo era discutir de maneira horizontal e programática pautas importantes para a construção da <i>movimentação</i> . Eram centradas em um foco de discussão temática importante para a cidade, em um ambiente de debate livre e aberto, mas sempre contando com a orientação de pessoas que tenham conduzido ou vivido experiências naquelas pautas. Em todas ocorreu um registro das propostas e discussões que, ao final, pautaram um documento síntese da “movimentação” e discussões posteriores (Entrevistado D). Os temas perpassaram as temáticas de meio ambiente, mobilidade urbana, igualdade de gênero, cultura, democracia radical, gasto público e combate à corrupção, dentre outras (Marques, 2019).	Mini-públicos
Plataforma de propostas online	Baseadas em plataformas de movimentos municipalistas espanhóis, como o o “ <i>Ahora Madrid</i> ” e o “ <i>Barcelona en comú</i> ”, utilizou-se da mesma base de código para propor uma plataforma de discussão de propostas. Foram incluídas, inicialmente, 120 propostas derivadas das Explosões Programáticas e, posteriormente, com a inclusão de propostas por cidadãos, elas passaram de 400 (Entrevistado D). Como principal funcionalidade, “as propostas recebiam votos e destaque na medida em que o apoio a elas aumentava, evidenciando as prioridades a serem buscadas no mandato coletivo. (...) consolidando assim as propostas que subsidiaram as candidaturas coletivas” (Marques, 2019, p. 106).	Participação digital
“Votou em uma, votou em todas”	Decisão de construir candidaturas coletivas, envolvendo o compromisso de se fazer campanha um para o outro, de arrecadar recursos em conjunto e compartilhar custos relativos a assessoria jurídica e contábil, dentre outros. Além disso, criou-se de um ateliê colaborativo em que a produção dos materiais de campanha também foi elaborada de maneira conjunta. O principal elemento gráfico da campanha foi uma sanfoninha impressa contendo as doze candidaturas com o perfil dos candidatos e as pautas defendidas por cada um (Entrevistado D).	Outros: campanha coletiva

Quadro 2. *Principais inovações democráticas das Muitas*
 Fonte: *Elaboração própria.*

Inovações	Descrição	Categoria
Gabinetona	Gabinete conjunto e compartilhado, sem divisórias e com equipe única - não há sala separada nem para as vereadoras. Tendo em vista a diferença de apenas 32 votos entre Cida Falabella e Bella Gonçalves (terceira colocada na chapa, não eleita), institui-se a <i>covereança</i> - experiência de mandato coletivo visando dar a Bella Gonçalves, internamente, as mesmas prerrogativas das outras duas parlamentares (Entrevistado D). Foi dada a possibilidade a todas as candidatas de participarem da composição da Gabinetona (Marques, 2019). Das doze, só três não integraram a equipe.	Governança participativa
Chamada pública para composição da Gabinetona	A Gabinetona municipal é composta por 40 pessoas, sendo que 7 delas passaram a compor a equipe através de um chamamento público aberto à cidade (Gabinetona, 2019b). Assim, "parte das vagas foi preenchida com chamamento público aberto à cidade, tendo se inscrito mais de 4000 pessoas com variados perfis" (Marques, 2019, p. 116). Também nesse processo seletivo foram observados os marcadores de gênero, raça e orientação sexual (Entrevistado D).	Governança participativa
Grupos Fortalecedores (G.Fortes)	"Grupos temáticos e/ou territoriais para debate, articulação política e colaboração especializada com o mandato. Servem como grupo de referência temático para escuta qualificada e diálogo permanente com a cidade..." (Marques, 2019, p. 127). "... o Grupo Fortalecedor é uma espécie de conselho político temático... é um grupo que pega e faz junto com a gente várias coisas, pra vários temas, desde saúde materna até PopRua, passando por culturas juvenis. Têm vários temas na Gabinetona que a gente provoca e desembola com essa colaboração de ativistas, pesquisadores, parceiros, que estão com a gente na rede..." (Entrevistada B).	Governança participativa
LabPops	Os Laboratórios Populares de Leis (LabPops) são oficinas para construção e/ou análise de Projetos de Lei (PL) de forma aberta e colaborativa - podem ser PLs do próprio mandato ou que estejam em tramitação. Geralmente presenciais (Marques, 2019). Todos os PLs elaborados até o momento na Gabinetona são derivados de LabPops (Entrevistado D).	Governança participativa
Zonas Megafônicas	"Eventos realizados em parceria com movimentos e colaboradoresx externos que promovem o encontro de corpos diversos para megafonizar as lutas sociais, por meio de debates políticos e ações culturais. São encontros de grande visibilidade e caráter espetacular para discutir temas transversais ao mandato" (Marques, 2019, p. 128).	Mini-públicos
Zonas de Confluência	"... debates em múltiplos formatos produzidos pela "Gabinetona" sobre temas afins ao mandato e reuniões de compartilhamento de experiências para ampliação da resistência no campo popular" (Marques, 2019, p. 128). São espaços para conversar politicamente a respeito de temas específicos, como a Reforma da Previdência, por exemplo, contando com a presença de especialistas ou figuras políticas. Geralmente, utiliza-se o formato de rodas de conversas (Entrevistado D).	Mini-públicos
Balanços abertos do mandato	Balanços do mandato abertos à cidade, realizados semestralmente em espaços públicos, para prestar contas das ações e das decisões das parlamentares, além de dialogar com os cidadãos (Gabinetona, 2019d). Envolve o detalhamento sobre projetos, visitas técnicas realizadas e ações em geral, organizadas em materiais que permitam diálogo com a população. Espaço para conversa direta com assessores, que respondem individualmente aos questionamentos dos cidadãos (Entrevistado D).	Mini-públicos
Mapa de circulação	Mapa interativo online com registros de locais e ações realizadas pelo mandato nas diversas regiões de Belo Horizonte, de sua Região Metropolitana, além de atividades em outros estados do país (Gabinetona, 2019c).	Outros: Transparência
Grupo de Teatro "AzDiferentonas"	"... grupo de teatro experimental e de educação popular da "Gabinetona", que nasceu do desejo de promover uma releitura do teatro legislativo de Augusto Boal, como método de criação, participação e mobilização popular. Tem como objetivos desenvolver uma rede articulada de Núcleos de Teatro do Oprimido em BH e Região Metropolitana, criando experiências com o Teatro Legislativo (...), além de realizar intervenções cênicas pelas ruas. Sua função é ser o elo poético e artístico visceral do mandato com a cidade permitindo a tradução de referida linguagem em projetos de lei, audiências públicas, requerimentos e demais ferramentas regimentais" (Marques, 2019, p. 129-130).	Governança participativa
"Cê Fraga?"	Chamada pública para cartografar iniciativas sociais e culturais do município. Em sua 1ª edição, foram mapeadas 313 iniciativas, sendo que 19 delas receberam uma doação de 5 mil reais. Na 2ª edição, com a temática de "Cultura Viva pelo bem viver", foram 198 iniciativas mapeadas e 15 selecionadas para receber doações (Gabinetona, 2019a). Ressalta-se que as doações financeiras são decorrentes de um fundo composto por doações de parte dos salários das parlamentares e o processo de seleção dos projetos a serem contemplados com as doações é realizado por pessoas externas à Gabinetona, geralmente inseridos em atividades artísticas e culturais diversas - de grupos religiosos de congado, da cena do <i>hip-hop</i> , da cena teatral etc. (Entrevistado D).	Orçamento participativo

Quadro 3. Principais inovações democráticas da Gabinetona
Fonte: Elaboração própria.



Notas

¹ Expressão empregada pelo Entrevistado A.

² Sigla do movimento correspondente a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersex e Queer.

³ Embora o momento subsequente não se coloque no foco do presente artigo, destaca-se que as Muitas participaram nas eleições de 2018, elegendo deputadas nas esferas estadual e federal.

⁴ Uma entrevista foi realizada em 2017 com um participante da construção das “Muitas”, que não chegou a ocupar um cargo na Gabinetona, referenciado como Entrevistado A, com o objetivo de colher informações sobre o contexto de surgimento da proposta. Outras duas foram realizadas com pessoas que participaram tanto da construção inicial da proposta das Muitas quanto do trabalho da Gabinetona, referenciadas como Entrevistadas B e C, sendo que uma delas se tornou vereadora e a outra não foi candidata - realizadas, respectivamente, em maio e julho de 2019. A quarta entrevista teve o objetivo de coletar informações específicas sobre cada uma das inovações democráticas e foi realizada em agosto de 2019 com um candidato das Muitas, que, após as eleições, trabalhou na Gabinetona, referenciado como Entrevistado D.

⁵ Ressalta-se que a questão da institucionalização dos movimentos sociais e suas perspectivas na literatura desse campo tem sido discutida e problematizada em diversos trabalhos no contexto brasileiro recente, na medida em que, a partir da Constituição Federal de 1988, construiu-se no país uma infraestrutura participativa plural e expressiva, com um grande número de instituições participativas, requerendo e implicando formas de ação institucionalizada dos movimentos sociais e atores coletivos participantes. Nessa linha, se destacam esforços teóricos, como na formulação de “repertório de interação” de Abers, Serafim e Tatagiba (2014).

Referências Bibliográficas

Abers, R., Serafim, L., Tatagiba, L. (2014). Repertórios de interação estado- sociedade em um estado heterogêneo: a experiência na era Lula. *Dados – Revista de Ciências Sociais*. Janeiro. 57 (2), 325-357.

Alonso, A (2009). *As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate*. Lua Nova, São Paulo, n.76, p. 49-86.

Brasil, F. P. D.; Carneiro, R.; Silva, T. S. A.; Bechtluft, R. P. (2017,



junho). Movimentos sociais e cidade: uma análise das formas de ação coletiva recente em Belo Horizonte. In: III Encontro Internacional Participação, Democracia E Políticas Públicas, Vitória.

Bringel, B. (2012, junho). Com, contra e para além de Charles Tilly: mudanças teóricas no estudo das ações coletivas e dos movimentos sociais. *Sociologia & Antropologia*, Rio de Janeiro, v. 02, n. 03, p.43-67.

Carlos, E. (2011). Movimentos sociais: Revisitando a participação e a institucionalização. *Lua Nova*, São Paulo, v. 84, p.315-348.

Diani, M. (1992). "The concept of social movement". *The Sociological Review*, v.40, n.1, pp.1-25.

Diani, M. (2003). "Networks and social movements: a research program". In: DIANI, Mario & McADAM, Doug (orgs.). *Social movements and networks: relational approaches to collective action*. Oxford: Oxford University Press.

Diani, M; Bison, I. (2010). Organizações, coalizões e movimentos. *Revista Brasileira de Ciência Política*, n. 3, pp. 220-249.

Domingues, L. B. (2019). *Junho de 2013: Atores, práticas e gramáticas nos protestos em Belo Horizonte*. 2019. 204 f. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Ciência Política, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

Elstub, S. & Escobar, O. (2017, abril). A Typology of Democratic Innovations. Paper for the Political Studies Association's Annual Conference, Glasgow. (*mimeo*)

Gabinetona. (2019a) *Cê Fraga?*. Disponível em: <https://gabinetona.org/cefraga/>. Acesso em: 14 jul. 2019.

Gabinetona. (2019b) *Equipe*. Disponível em: <https://gabinetona.org/quem-constroiu/equipe/>. Acesso em: 14 jul. 2019.

Gabinetona. (2019c) *Mapa de circulação*. Disponível em: <https://bit.ly/3hPfmF6>. Acesso em: 14 jul. 2019.

Gabinetona. (2019d) *Transparência*. Disponível em: <https://gabinetona.org/#transparencia>. Acesso em: 14 jul. 2019.

Melucci, A. (1996). *Challenging codes*. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Marques, G. P. (2019). *Megafonizar as lutas: A experiência das Muitas e da Gabinetona em Belo Horizonte*. 2019. 183 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.



Santos, B. de S.; Avritzer, L. (2002). Para ampliar o cânone democrático. In: Santos, B. de S. (Org.) *Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Tarrow, S. 2009 [1998]. *O poder em movimento: movimentos sociais e confronto político*. Petrópolis: Vozes.

Tilly, C. (1978). *From mobilization to revolution*. Nova York: Random House. Tilly, C. (1993). Contentious repertoires in Great Britain, 1758-1834. *Social Science History*, no 17.



Protestas vecinales durante la transición democrática argentina. Estudios sobre su desarrollo en un municipio de la región Centro-oeste santafesino.

María Cecilia Tonon¹

Resumen

La transición a la democracia en Argentina fue un proceso complejo, que tuvo sus efectos contradictorios, observados en las variaciones y reposicionamientos de diferentes actores sociales. De este modo es posible ver, por un lado, que una vez entrada la dictadura militar en evidente decadencia después del fracaso del Malvinas en 1982, los “partidos amigos” del proceso, se apresuraron a tomar distancia del régimen, al tiempo que varias movilizaciones vecinales en distintos partidos suburbanos de la provincia de Buenos Aires clausuraron estas formas de pervivencia. Pero, por otro lado, hay interpretaciones que estiman que la capacidad de alejamiento de los socios políticos frente al retiro del poder militar y la organización de acciones vecinales, son relativas, evidenciándose lógicas de continuismo y consenso.

A partir de estos antecedentes, en esta ponencia nos interesa ahondar en el universo de estudio de los “vecinazos” de comienzos de los ochenta en Argentina, pero a la luz de un análisis más micro, atendiendo a escalas regionales o locales que nos permitan identificar procesos comunes o divergentes entre los escasos trabajos que existen sobre este tema, en especial, en el interior del país. Particularmente nos problematizamos cómo fue la protesta vecinal en Rafaela, un municipio del Centro-oeste santafesino, contemporánea a los sucesos producidos en el Gran Buenos Aires, pero que dadas las características de la localidad y de la región la hacen representativa para su estudio. Nos proponemos analizar sus orígenes y desarrollo, detectar sus principales actores y describir las acciones contenciosas desplegadas en el marco del conflicto.

Los datos obtenidos y su tratamiento nos permiten señalar que el caso abordado refleja algunos elementos de los repertorios de acción de los vecinazos bonaerenses, pero otros, marcan una huella singular en torno a la resolución del problema y las relaciones con la autoridad política local, primando una lógica de consenso.

Palabras clave

Protestas vecinales; Transición democrática argentina; Municipios; Provincia de Santa Fe; Región Centro-oeste.



Introducción

El presente trabajo surgió del hallazgo de fuentes periodísticas, a partir de las cuáles fue posible comenzar a reconstruir un hecho histórico: el desarrollo de una protesta vecinal en contexto de dictadura en una ciudad del Centro-oeste santafesino. Este acontecimiento podría pasar desapercibido si no fuera porque las protestas sociales en este tipo de localidades fueron casi inexistentes o, cuando las hubo, tuvieron escasa repercusión. Pero en octubre de 1982, casi contemporáneamente a las manifestaciones de vecinos en los partidos del Gran Buenos Aires y en Córdoba, el diario La Opinión de Rafaela informaba acerca de la movilización vecinal en contra del aumento de la tasa municipal. ¿Quiénes participaron de esta protesta? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuáles fueron las demandas y los repertorios de acción? ¿Por qué, en una ciudad donde “nunca pasa nada”, aparece esta protesta, visibilizada, además, a través del diario que más llegada tenía en la ciudad y en la región? Estos interrogantes estarían señalando un recorte analítico sobre un ciclo de protestas vecinales que se dio en las postrimerías de la última dictadura militar en la Argentina; sucesos poco estudiados, a excepción de los trabajos detectados de González Bombal (1985) y Ana Carol Solís (2016), que abordan los casos de Buenos Aires y Córdoba respectivamente.

La propuesta abreva en dos vertientes. Por un lado, en la historia del presente, o del tiempo presente, es decir, aquella historia que se escribe al tiempo que se está produciendo, sujeta al movimiento entre la experiencia y las expectativas de los actores, por tanto, se trata de una historia móvil, que nunca termina de pasar. Como diría el historiador Julio Aróstegui (2004), el presente no es una creación física, sino una construcción socio cultural, por ende, es distinto en cada sociedad, en cada sujeto. De esta forma, no es posible hablar de un presente, sino de “presentes”, en plural. Allí, el historiador tiene que dar cuenta de cómo es la historia de los que la hacen, atendiendo a las voces de sus protagonistas, lo que lo lleva a trabajar con la peculiaridad de las fuentes orales, contrastándolas con otras fuentes, de otro tipo de archivos.

En la Argentina, se ha preferido la noción de “historia reciente” para denominar este estudio del pasado cercano, atendiendo a un:

“...fuerte predominio de temas y problemas vinculados a procesos sociales considerados traumáticos: guerras, masacres, genocidios, dictaduras, crisis sociales y otras situaciones extremas que amenazan el mantenimiento del lazo social y que son vividas por sus contemporáneos como momentos de profundas rupturas y discontinuidades,



tanto en el plano de la experiencia individual como de la colectiva” (Franco y Levín, 2007, p. 34)

Se trata de un estatuto epistemológico inestable y con periodizaciones más o menos elásticas, como señalarían las autoras Franco y Levín (2007), pero como categoría para iluminar cierto tipo de historia, la del corto plazo, nos interesa esencialmente para el recorte analítico de este trabajo.

Por otro lado, es posible indagar el objeto de estudio en el horizonte de los movimientos sociales, o de los nuevos movimientos sociales, surgidos hacia finales de la última dictadura argentina y que se focalizaron en torno a cuatro tipos de movimientos: los de derechos humanos, los barriales o vecinales, de mujeres y los juveniles. Todos estos tenían en común que representaban las formas de organización y movilización en el contexto del “espíritu de democratización del país y confrontaban con los modos clásicos de la política corporativa” (Pereyra, 2008, p. 237). Asimismo, colaboraron con la proliferación y consolidación de organizaciones específicas, el desarrollo de amplios consensos y redes de solidaridad que se desplegaron por todo el entramado social y político.

En el universo de los movimientos sociales, las protestas sociales ocupan un lugar central, sin perder de vista, como refiere Federico Schuster (2005), que éstas “constituyen un modo especialmente interesante de la acción colectiva” (p.43)². En este sentido, entendemos por protesta a “un acontecimiento visible de acción pública contenciosa de un colectivo, orientado al sostenimiento de una demanda” (p. 67). Algo que ocurre y como tal puede ser contado, medido, objetivado; dando cuenta de la presencia de sujetos que ponen en el mundo realidades a partir de su propia intervención. Ahora bien, siguiendo a Carlos Aguirre Rojas (2010) es posible observar distintas formas y expresiones de la protesta social (luchas, motines, rebeliones, insurrecciones y revoluciones de las clases populares y subalternas), atendiendo a:

- los gestos individuales de descontento e insubordinación;
- las formas colectivas y masivas;
- las expresiones subterráneas y encubiertas o, por el contrario, públicas y abiertas;
- el grado de extensión: efímeras y fugaces, o sostenidas en el tiempo;
- su espontaneidad e inmediatez, o bien, la planificación u organización;



- las luchas de distinta magnitud, carácter, duración y estructuración que se limitan a expresar una respuesta al agravio, la explotación, la discriminación, pero sin trascender el horizonte del sistema social, en contrapartida de aquéllas que van más allá del horizonte intra sistémico, con objetivos anti sistémicos y revolucionarios.

Atendiendo a estas nociones, como otras que se encuadran en el análisis de la protesta social y de la acción colectiva, nos es posible enmarcar conceptual y metodológicamente el universo de análisis de esta ponencia.

Ambos enfoques permiten analizar la experiencia de las protestas vecinales en el contexto de transición democrática, un proceso complejo, en el que se pusieron en juego distintos procedimientos de salida de la dictadura y de entrada a la institucionalidad democrática. Rasgos principales de esta transición, según diferentes autores que analizan este proceso, podrían ser una retirada militar “desordenada”, que puso en evidencia las divergencias y los conflictos al interior de la cúpula castrense y que afectó la autoridad de las Fuerzas Armadas frente a la sociedad (Canelo, 2008; Acuña y Smulovitz, 2007; Fontana, 1986); el renacimiento partidario y la profusión de afiliaciones en casi todos los partidos -especialmente en los mayoritarios- (Novaro y Palermo, 2006); todo ello en el marco de un “convulsionado armado de un sistema político” (Cavarozzi, 2006) reflejo, a la vez, de una incertidumbre política (Vommaro, 2006).

En el recorte espacial que seleccionamos para este estudio, esto es, el Centro-oeste santafesino, particularmente la ciudad de Rafaela, algunos de estos aspectos pueden evidenciarse, a pesar de tratarse de una ciudad que logró sortear la intervención militar, a diferencia de otras localidades de la zona, y que conoció una suerte de aislamiento o, como diría Gabriela Águila (2008) en la que:

“la política local quedó limitada a actividades cuya puesta en marcha respondía a las iniciativas del poder comunal, determinando que la vida política se ‘congelara’ durante años, mientras la actividad municipal quedaba reducida a las visitas del intendente y sus funcionarios a los barrios, la supervisión de la marcha de las obras públicas, la participación en actos y celebraciones de distinto tenor y las convocatorias a la ciudadanía en apoyo a las obras del Ejecutivo” (p. 271)

Entre 1976 y 1983, en la ciudad de Rafaela, hubo una apuesta por la eficiencia y el mejoramiento en general, que hizo mella en el rafaélino medio. Durante todo este período, las fuentes coinciden en resaltar el importante crecimiento de la ciudad asociado a una política de racionalización de recursos, de inversión en infraestructura



por parte del gobierno municipal, sumado a la inversión privada. Esta tendencia modernizadora pareció coincidir con cierta aquiescencia del “pueblo rafaélino”, renuente a la radicalización política que caracterizó a gran parte de estos años, tanto en el aspecto de la movilidad sindical como en el de la actuación de grupos de izquierda³. En este sentido, podría decirse que en Rafaela comenzó a instalarse desde entonces una cultura de isla, imaginario a partir del cual también es posible analizar la movilización social en clave local.

La protesta vecinal en Rafaela: Características, actores y desarrollo

Los orígenes del conflicto

Los primeros días de octubre de 1982, apareció en uno de los matutinos locales⁴ de la ciudad de Rafaela la noticia de una próxima movilización y concentración en la Plaza 25 de mayo hasta la municipalidad. La marcha fue dispuesta por una asamblea de vecinos, con motivo del alza “desmedida” de la Tasa General de Inmueble. Se trataba de la incorporación de dos cuotas de reajuste de la Tasa General para 1982, que “conformaban parte de lo previsto adicionar a ese impuesto” y que, según fuentes municipales, “no modificaba casi nada la situación sino que solamente vari[aba] los términos aplicados.” (La Opinión, 3/10/82: 4)

La asamblea había surgido tras una convocatoria de la agrupación multisindical “Lealtad”, que había convocado a una asamblea popular. Dicha asamblea estuvo encabezada por los gremios que conformaban la multisindical: el Sindicato de la Carne, el Sindicato Mecánica y Afines Transporte Automotor (SMATA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). Pero, además de estos representantes sindicales, hubo otras presencias políticas, que también habían estado actuando en confrontación con esta medida municipal, como la Multipartidaria⁵ local, que llevaba muy poco tiempo de conformación, en la que confluían representantes de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, un sector del Movimiento Línea Popular y el Partido Justicialista.

Toda esta movilización era el resultado de una reunión previa (en septiembre del mismo año) que había tenido la Comisión de vecinos con el Intendente, sin llegar a ninguna solución. Luego pasaron a una audiencia con el Secretario de Acción Comunal, quien les había prometido interceder en las negociaciones con el intendente, pero que después finalmente no se produjo. Llegados a esa instancia y tras no haber obtenido resultados ni apoyos concretos que modificaran las disposiciones municipales, la asamblea convocó a una nueva junta para definir los criterios a seguir.



De acuerdo con una fuente periodística provincial, se resolvió el no pago de la tasa municipal y la conformación de una Comisión que gestionara ante el gobierno municipal el otorgamiento de plazos sin intereses ni recargos y el no inicio de juicios para quienes no paguen. Lo llamativo fue que, en la misma noticia, aparecía referido que “horas antes de la asamblea”, el gobierno municipal había informado “por todos los medios locales” la necesidad del incremento de la tasa, a razón de los niveles de inflación que se vivía en el país y justificando que era la forma de “evitar que los servicios públicos se resientan en calidad o cantidad.” (El Litoral, 6/10/82: 9) Esta situación estaría indicando que las autoridades municipales estaban en conocimiento de la realización de la reunión vecinal y, por tanto, se habían adelantado reivindicando públicamente la necesidad del aumento.

La situación generó una tensión generalizada de ambas partes, en la que cada una desplegaba a su favor argumentos en contra o a favor de la instrumentación de nuevas cuotas de la Tasa General de Inmuebles. Para el gobierno de facto se trataba de una medida necesaria para contener el impacto de la alta inflación que se venía dando desde la segunda mitad del año 1982, de que resultaba el impuesto más bajo de la provincia en cuanto al porcentaje (80% de aumento), además de que se habían negociado la postergación del vencimiento de la primera cuota, brindado facilidades a los propietarios de un solo inmueble y con bajos recursos y, sobre todo, que a la fecha del vencimiento de la primera cuota ya habían pagado el 75 % aproximadamente de los contribuyentes, lo que evidenciaba el respaldo de los vecinos a la gestión. Según la Asamblea vecinal, el contribuyente rafaolino desconocía el monto total que se debía pagar por la TGI y que su reajuste “castiga[ba] injustamente a quienes ha[bía]n cumplido en término con el pago de la misma y que consideraban haber cancelado su obligación.” (El Litoral, 10/09/82). Además, de acuerdo con datos que los vecinos habían indagado en entidades bancarias, sólo se llegaba al 40 % del pago por parte de la población (La opinión, 7/10/82: 4). Finalmente, acusaban al ente municipal por violar “el principio de legalidad de los tributos que implica su determinación previa en la ley” (El Litoral, 10/09/82).

Repertorios de acción vecinal: Desde la plaza principal al palacio municipal

Las asambleas les habían brindado a los organizadores el marco desde donde instalar la protesta y formalizar las acciones a seguir. Estas últimas giraron en torno a la concentración del día 7 de octubre en la Plaza 25 de mayo, la principal de la ciudad, y su posterior movilización por boulevard Santa Fe hasta el edificio municipal (en ese



momento emplazado en un inmueble sobre el mismo boulevard, a tres cuadras de la plaza) para hacerle entrega al intendente de un petitorio, firmado por 5000 contribuyentes. El documento contenía las reivindicaciones tratadas en las reuniones previas: 1- ratificación del fundamento democrático que avalaba el petitorio sobre la base de un plebiscito con 5000 firmas; 2- reclamo del derecho de peticionar y reivindicación de la vocación dialoguista de la Asamblea; 3- exigencia de reconsideración de la medida y, 4- decisión de no pagar los reajustes hasta que no se resuelva el conflicto. Este documento fue leído durante el acto en la plaza, en el que se convocaron alrededor de trescientas personas (según la información del diario La Opinión) que se movilizaron hacia la municipalidad, atravesando en su marcha la arteria principal de la ciudad. En las fotografías del diario se pueden observar gente caminando con tranquilidad, algunos incluso abrazados, otros con sus bicicletas en la mano, gestualidades que evidencian cánticos, y, como refiere un testimonio oral, “tal vez algún cuete”. (Entrevista a OM, comunicación personal, 4 de enero de 2019).

Tras la llegada de la columna a las puertas de la Municipalidad, los manifestantes entonaron el himno nacional y, a continuación, el secretario privado del intendente transmitió que podían ingresar sólo tres integrantes al despacho municipal. Los miembros de la Comisión Vecinal exigieron la participación de todos sus miembros en la reunión, pero como no llegaron a un acuerdo, no se entregó el petitorio y “permanecieron entonces 20 minutos coreando estribillos adversos al gobierno municipal y a la dictadura militar” (El Litoral, 9/10/82: 3).

¿Cuál fue el resultado de la concentración y de la movilización? A primera vista, se podría pensar que, para los manifestantes, tal vez no fue el esperado: no lograron hablar con el Intendente, ni dejarle el documento; mientras que el gobierno municipal, pareció salirse con la suya. Sin embargo, si ajustamos el foco en las características de la protesta, podemos llegar a conclusiones menos evidentes. Por un lado, los asamblearios instalaron públicamente la discusión y negociación del impuesto inmobiliario, por otro, visibilizaron el malestar, el repudio contra la medida municipal, a la vez que movilizaron a un número tal vez poco representativo, pero que significaba un hecho fundante para una ciudad y en un momento renuentes a este tipo de manifestaciones. Como bien referirían dos entrevistados:

“...habíamos estado conformes con la gente que fue. Tal vez no fue la que pensábamos, pero estábamos conformes” (Entrevista a OM, comunicación personal, 4 de enero de 2019).



“...cien tipos caminando, cortando el tránsito en Avenida Santa Fe (...) Fue un hecho que, para esa altura de las cosas, que no se podían expresar, que nunca ni chicha ni limonada, era importante estar, hacer y decir `mirá, no estamos conformes con esto” (Entrevista a LT, comunicación personal, 28 de enero de 2019).

Hacia la resolución (unilateral) del conflicto vecinal

Dos días después de la movilización vecinal, el diario La Opinión informaba el estado de situación del conflicto. El titular de la noticia era contundente: “Tasa: tema aclarado”. En la foto de tapa, aparecían el intendente municipal y algunos miembros de su gabinete, en la del interior del periódico, más panorámica, se observaba la presencia de otros actores, representantes de las “fuerzas vivas” de la ciudad, que habían sido invitadas especialmente a la conferencia de prensa⁶, pero en ningún momento se ve o menciona a los vecinos.

Toda la noticia fue recuperando los informes de la voz municipal en la que se reprodujeron datos de guarismos de gastos del municipio para contrastar el reclamo de un alza, justificando la suma del índice del 300 % de inflación a nivel nacional que se esperaba para fin de año, además de mencionar ejemplos de aumentos de tasas en otros municipios de la provincia, aseverando (como ya lo habían hecho en otra oportunidad) que “Rafaela esta[ba] en categoría segunda `A´ y fue el aumento más bajo de todos.” (La Opinión, 9/10/82: 4). Asimismo, se transcribieron dichos del intendente respecto de las obras realizadas, la compra de edificios, aduciendo que no se trataban de obras “faraónicas”, sino “de envergadura, de largo aliento y costosas”, relativamente “baratas” si se las comparaba con otras obras particulares (menciona a la de SMATA) y en el marco de una política de austeridad, de la cual “este municipio (...) [era] un verdadero ejemplo” (Ibidem). Por último, el matutino cerró la información aduciendo que “Las puertas del municipio están abiertas”, en alusión a ciertas “ausencias” que el Intendente justificó como una política de los últimos 6 años de la gestión de “no invitar a partidos políticos” y, en especial y en el marco de este conflicto, al sector sindical que originó el movimiento vecinal, puesto que el día anterior habían recibido insultos agraviantes por parte de algunos de sus representantes, pero que dejaba abierto un diálogo futuro siempre que fuese “con respeto” (La Opinión, 9/10/82: 12) Un entrevistado, parte del gobierno municipal del momento recordaba la situación de esa reunión:

“Fue magistral. Fue una clase.” (...) “...tiraban números, y porque esto, y porque esto, y la cara se les transformaba...y viste cuando empezaban a mirarse entre ellos y empiezan a mover los pies y había más de uno que debe haber pensado `por qué estoy acá´ [se



refiere a algunos de los representantes de la Asamblea de vecinos que participaron de la reunión convocada por el Intendente]” (Entrevista a GZ, comunicación personal, 8 de agosto de 2019)

Las palabras del testigo son muy indicativas y, en parte, se corresponden con lo que se puede indagar en la fuente escrita: información probatoria de transparencia en el manejo de los fondos públicos, inversión en obras, pero a la vez, austeridad, ejemplaridad y eficiencia, aspectos que se condicen con la política de “modernización neutral” puesta en marcha por el Proceso militar (Novaro y Palermo, 2003).

Un par de días después, el mismo diario planteaba que “la polémica suscitada por las cuotas sexta y séptima de la Tasa General se da[ba] por concluida.” Explicaba que, según las cifras y el nivel comparativo ofrecidos por el Intendente en la última reunión informativa, no dejaban dudas sobre la necesidad de aumentar la Tasa General un 80 % más que el año anterior, en una clara connivencia con los argumentos del Ejecutivo municipal. Además, se refrendaba la actitud municipal con la reciente política elevada por el nivel nacional de autorizar a las provincias a aumentar las tasas impositivas en lo que quedaba del año.

Con esta medida, para el Estado local culminaban las discusiones por estos temas, porque, además, “Rafaela (...) se enc[ontraba] en materia de presión impositiva, en una situación que podría calificarse de excelente para los contribuyentes” (La opinión, 11/10/82: 4). Se clausuraba así, unilateralmente, el conflicto por la Tasa. Quedaba más que clara la posición del gobierno local, que desde el poder que le confería la situación de facto había manejado la situación, resolviéndola a su favor.

La Comisión Vecinal no se mostró inactiva luego de que las diferentes intervenciones del Intendente dieran por ocluida las discusiones. Por la información que apareció en el diario La Opinión entre el 14 de octubre y noviembre de 1982, la misma continuó reuniéndose para organizar “los pasos a seguir en el futuro, no descartándose la idea de convocar a una conferencia de prensa, en la cual se refutarían (...) conceptos brindados por el intendente Juan Carlos Borio”, de la misma manera que afirmaba solicitar una audiencia al gobernador Casís. Es decir, a pesar del evidente fracaso en las negociaciones, el malestar y la confrontación pervivió por un tiempo, al menos en el plano de los principios, porque lo que siguieron fueron acciones contenciosas en un ámbito que no pasó de la denuncia pública a través de los diarios locales.



En enero de 1983 apareció una solicitada firmada por la “Comisión de Vecinos de Rafaela” en la que se describían características y actitudes del ente vecinal, respecto de las del gobierno local, evidenciando una clara diferencia y una posición bipolar. De una parte, la Comisión reivindicaba su origen “popular”, derivado del “mandato de una Asamblea de vecinos” y de las firmas de 5000 ciudadanos que habían avalado el reclamo, a la vez que se destacaba la “vocación dialoguista” y el “espíritu democrático” que todo el tiempo habían manifestado durante el conflicto. Por otra parte, criticaban al gobierno local que, elegido por un “Almirante, de espaldas a la conducta de la voluntad popular”, atentaba contra el “federalismo”, haciendo “imposible la autonomía municipal” (La Opinión, 12/01/83: 8).

En la comunicación se reconocía que no se habían logrado los objetivos propuestos por la actitud “vanidosa”, “arrogante”, “injusta” por parte de las autoridades municipales, pero que, por otra parte, significó una toma de conciencia de los vecinos, de sus derechos y de “buscar las formas más viables para participar en el manejo de los intereses comunitarios” (Ibidem). Algunos de los assembleístas entrevistados, indicaban que:

“...no sé si se ganó, se perdió, se empató, no importa. A los 15 o 20 días o al mes, no me acuerdo...vos ves que no hay resultados, tenés que cortar. ¿Por qué? Porque sino te vas muriendo solo y perdés como un pelotudo. ¿Qué hacés?: - ‘muchachos, hasta acá llegamos’. No tuvimos fuerza, empatamos, tal vez perdimos o ganamos, pero yo...trabajaba así. Porque hay un desgaste infernal.”

(...) Todos estos reclamos que hace un ciudadano (yo lo veo así), tienen un inicio y tienen que terminar: perdí, gané o empaté, porque sino te volvés loco. Y la gente, en vez de que vaya más, va menos, cuando te das cuenta, te quedás solo...” (Entrevista a OM, comunicación personal, 4 de enero de 2019)

La protesta por el aumento de la Tasa General de Inmuebles entró en un cono de sombras luego de esta solicitada aparecida en enero de 1983. La idea del “empate” trunco es sugestiva en esta lucha porque, si bien quedó más que claro para los protagonistas que la gestión municipal había salido victoriosa; el fracaso tras no haber podido cumplir con los objetivos inmediatos propuestos, no fue más que una evocación cuyo transfondo reveló una victoria: la de haber construido un “hecho político” (Entrevista a LT, comunicación personal, 28 de enero de 2019).

Algunas reflexiones finales

El aumento de la tasa municipal en la ciudad de Rafaela a fines del año 1982 pareció instalar una contienda entre partes, que trascendió la mera preocupación de los



contribuyentes. ¿Qué era lo que se estaba jugando en dicho conflicto? ¿Quiénes y qué intereses se pusieron en pugna? Aquellas interpretaciones que analizan las protestas sociales indican que una manifestación de protesta puede ser, por ejemplo, la acción de un movimiento previamente existente o no, por tanto, hay que atender a sus orígenes. De este modo, se pueden encontrar mixturas en las que:

- los agentes de la protesta integraban ya (en conjunto) un movimiento;
- algunos de los miembros eran parte de uno o más movimientos anteriores, con o aun sin relación alguna con la acción actual;
- la acción manifiesta constituyó una completa novedad, que no surgió de ningún movimiento conocido ni reconocía antecedente alguno en acciones anteriores de sus miembros⁷.

En el caso de la protesta analizada, encontramos una combinación de todos estos elementos: había agentes que provenían de organizaciones previas, como los representantes de la Comisión de vecinos, que venían militando en sindicatos u organizaciones políticas (como la multipartidaria), pero que se aglutinaron con otros miembros, la mayoría sin ninguna militancia previa, en este caso, vecinos o contribuyentes afectados por el alza del impuesto, que se movilizaron para el sostenimiento de la demanda. Por lo que se pudo indagar en las fuentes orales, entre los 5000 firmantes y los 300 participantes de la marcha, había muchos trabajadores que respondieron al pedido de sus dirigentes:

“...no me tiro flores, porque vas a decir este se cree Gardel, no. Nuestro sindicato fue una maravilla, de gente... y de firmar, era por nosotros, para darnos una mano y la UOM, algo también, los lácteos...”

“...fueron varias mujeres del sindicato (...), cuando fuimos a caminar” (Entrevista a OM comunicación personal, 4 de enero de 2019)

Estos testimonios podrían estar indicando lo que Charles Tilly (como se citó en Schuster, 2005), observó tras la idea de *reticidad*, es decir, que siempre hay alguna clase de interacción social antes de una acción de protesta. Gran parte de los manifestantes se conocían previamente, pero, también, se fundaron nuevos vínculos e interacciones sociales, como lo puso en evidencia las reuniones en la que interactuaron trabajadores y sindicalistas, juntamente con representantes de los diferentes partidos políticos que comenzaron a nuclearse en la multipartidaria local. Por tanto, se trató de una protesta con una identidad social bastante heterogénea, que desplegó diferentes repertorios de



acción: como las discusiones asamblearias, la toma del espacio público -en lo que fue la concentración en la plaza principal de la ciudad y la marcha hacia el palacio municipal-, manifiestos en los diarios locales y regionales y reuniones con los representantes del Estado local y provincial (en el caso del Secretario de Comunas). Todo esto en torno a la demanda concreta de no aumentar el impuesto, pero cuyo trasfondo estaría señalando, también, un contexto histórico particular que configuró, en cierta forma, las condiciones estructurales de la protesta, esto es, la renovación de la participación política y ciudadana en el marco del debilitamiento de la dictadura post Malvinas. En este sentido, la movilización social estudiada puede insertarse en lo que Tarrow (1997) denomina los “ciclos de protestas”, en los que, a partir de las oportunidades creadas por las primeras movilizaciones, se genera un proceso de difusión de las protestas.⁸

A lo largo de 1982, pero fundamentalmente a partir de la segunda mitad de este año, encontramos registros gráficos de manifestaciones en la ciudad de Santa Fe y en la región centro, de agrupaciones de amas de casa en contra de la carestía (El Litoral, 18/09/1982), y de deudores hipotecarios por las cláusulas indexatorias (El litoral, oct.-dic. 1982). Sin embargo, en el caso del aumento de la Tasa General de Inmueble, la protesta de Rafaela fue una precursora dentro de la región centro y centro-oeste de la provincia de Santa Fe, y resultó contemporánea de los “vecinazos” (González Bombal, 1985) en el Gran Buenos Aires, que se desarrollaron entre octubre y noviembre de 1982. Pero, a diferencia de estos últimos, que cobraron repercusión nacional por el grado de radicalización y masividad de las movilizaciones (además de tratarse de la provincia más importante del país), por las consecuencias que produjeron en cuanto a la remoción de autoridades de facto en algunas localidades, la protesta rafaélina no supo (o no pudo) sensibilizar al Estado local y a la sociedad rafaélina, en general, frente a los cuestionamientos que se estaban planteando y que atravesaban a todos los contribuyentes.

Podrían esgrimirse algunas explicaciones posibles a esta situación. Siguiendo los análisis de Gabriela Águila (2008) y Daniel Lvovich (2010), al mantener el proyecto dictatorial los gobiernos municipales previos al golpe de 1976, como fue el caso de Rafaela, generaron un amplio grado de consenso político, no sólo bajo la forma de “alguna figura con amplio reconocimiento en la comunidad” (Lvovich, 2010: p. 415), sino también, a través de las vinculaciones que estas mismas autoridades fueron tejiendo con diferentes asociaciones de la sociedad civil, generando redes de intereses comunes y contrarrestando cualquier tipo de cuestionamientos. De esta forma, le permitió a la



ciudad seguir con su rutina diaria, centrada en la producción y el progreso que la caracterizan, aislándose de los conflictos. Esto fue muy evidente durante la negociación por el impuesto, momento en que el intendente se reunió con las “fuerzas vivas” de la ciudad para generar el respaldo necesario que le permitiera refrendar la política municipal. En este sentido, un entrevistado que en ese momento formaba parte del gabinete municipal comentaba:

“...pero qué pasó, Rafaela medio se cerró más todavía (...) Entonces, la relación del gobierno municipal fue muy fuerte, con el Centro Comercial (...), con la gente de la rural (...) y también muy buena relación con la CGT (...). Aparte porque era una relación muy rápida. (...) Siempre, para las grandes cosas se los convocaba, desde el Centenario...siempre estuvieron. Siempre hubo muy buena relación y muy fluida” (Entrevista a GZ, comunicación personal, 8 de agosto de 2019).

Palabras más que indicativas para sostener el predominio del consenso, la renuencia por parte del Estado local a cualquier tipo de manifestación que comportara una ruptura del orden social, y la situación política que “no daba mucho para protestar” (Entrevista a GZ, comunicación personal, 8 de agosto de 2019); aspectos éstos que terminaron por congelar el tibio despertar ciudadano.

El estudio de la protesta vecinal en Rafaela, no se cierra con este trabajo, en el que sólo damos cuenta de algunas de sus características principales. Consideramos que queda mucho por indagar, aún. De los testimonios recolectados, faltan todavía varias voces por escuchar: otros sindicalistas, algunos representantes de otras fuerzas políticas que integraron la Comisión Vecinal, vecinos que compusieron la asamblea, responsables de asociaciones civiles, etc. Asimismo, sería interesante adentrarnos al estudio comparativo con los casos del Gran Buenos Aires, contemporáneos al aquí abordado para poder encontrar el sentido o el impacto que los vecinazos tuvieron durante la transición a la democracia.

Notas

¹ DNI 23027593 - (IHUCSO-CONICET / CESIL-UNL) – tononcec@hotmail.com

² Para ampliar el concepto de “acción colectiva”, véase Tilly, A. (2000).

³ Cfr. Tonon, M.C. (2011).

⁴ Son dos los periódicos que existían (y perviven actualmente) en la ciudad de Rafaela: el diario La Opinión y el Castellanos. Ambos tuvieron una destacada intervención en la comunicación de los hechos más sobresalientes de la localidad y la región, sin embargo, no existen investigaciones que analicen su historia o ideología. A modo informativo,



mencionamos que el perfil de ambos periódicos estuvo signado desde sus orígenes, por la filiación de quienes fueron los fundadores y directores durante décadas. En el caso del diario Castellanos, fundado en 1938, vinculado a Juan B. Audenino y Francisco Perez Torres, ambos representantes del partido radical local; mientras que *La Opinión*, que surgió en 1921, desde la década de los cincuenta estuvo más ligado al peronismo (uno de sus socios fundadores, Rafael Actis, fue un destacado representante del PJ local). En general, ambos mantuvieron una actitud mesurada, disciplinada durante el período dictatorial.

⁵ La multipartidaria fue una organización surgida a nivel nacional a comienzos de 1981, que configuró un espacio de articulación entre distintas agrupaciones políticas con las intenciones de promover acciones para volver al Estado de Derecho, la normalización de la actividad política, gremial, cultural y empresaria, el retorno a la institucionalización, etc. A partir de esta entidad nacional se configuraron distintas multipartidarias en los órdenes provincial y local. En el caso de la provincia de Santa Fe, la convocatoria fue casi simultánea a la nacional y estuvo conformada por el MID, PJ, UCR, Partido Revolucionario Cristiano, Frente de Izquierda Popular y MOLIPO. Más tarde se sumaron: Partido Federalista, Partido Comunista, Partido Socialista Popular, Partido Socialista Unificado, Movimiento progresista, Frente de Izquierda Popular, Confederación Socialista Argentina. De acuerdo con el estudio de Águila (2008), un sector del PDP, “el movimiento Latorrista, ingresó a la Multipartidaria provincial cuestionando duramente la línea oficial del PDP y el colaboracionismo con la dictadura.”, p. 312.

⁶ Se trataba de representantes: del Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos, de la mesa directiva de la regional Rafaela de la Confederación General del Trabajo, de la Sociedad Rural, de las Comisiones Vecinales, del Rotary club, del Club de Leones, del Rotary Club Rafaela Oeste, de Rotarac, del club Leo Fides, de la Fundación Universitaria Rafaelina y de los medios de comunicación de la ciudad (Diario *El Litoral*, 9/10/82, p. 9).

⁷ Véase Schuster, F. (2005).

⁸ Para ampliar el concepto véase Tarrow (1997), pp. 59-61.

Fuentes periodísticas

La Opinión, Rafaela, Ediciones 1982 y 1983.

El Litoral, Santa Fe, Edición 1982.



Referencias bibliográficas

- Acuña, C. y Smulovitz, C. (2007). "Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional". En Pérotin-Dumon, A. (dir), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, Disponible en internet en: <http://ética.uahurtado.cl>.
- Águila, G. (2008). *Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Aguirre Rojas, C. (2010). *Movimientos Antisistémicos. Pensar lo antisistémico en los inicios del siglo XXI*. Rosario: Prohistoria Ediciones.
- Aróstegui, J. (2004). *La historia vivida. Sobre la historia del presente*. Madrid: Alianza.
- Canelo, P. (2008). *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires: Prometeo.
- Cavarozzi, (2006). *Autoritarismo y democracia (1955-2006)*, Buenos Aires: Ariel.
- Franco, M. y Levín, F. (2007). *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires: Paidós.
- Fontana, A. (1986). "De la crisis de Malvinas a la subordinación condicionada: conflictos intramilitares y transición política en Argentina", En *Working Paper 74*, S/I: Kellogg Institute.
- González Bombal, I. (1988). "Los vecinazos: las protestas barriales en el Gran Buenos Aires, 1982-83". En Jelin, E. *Los nuevos movimientos sociales/2. Derechos humanos. Obreros. Barrios*. Buenos Aires: Ediciones del Ides.
- Lvovich, D. (2010). "Burócratas, amigos, ideólogos y vecinalistas: el reclutamiento de funcionarios municipales de Morón durante la Dictadura Militar (1976-1983). En Bohoslavsky, E. y Soprano, G. (ed) *Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad)*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Novaro, M. y Palermo, V. (2006). *La dictadura militar 1976-1983: del golpe de estado a la restauración democrática*. Buenos Aires: Paidós.
- Pereyra, S. (2008). *La lucha es una sola. La movilización social entre la democratización y el neoliberalismo*. Los polvorines: Universidad de General Sarmiento; Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
- Schuster, F. (2005). "Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva.". En Schuster, F., Naishtat, F., Nardacchione, G., Pereyra, S. (Comp.) *Tomar la palabra*.



Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Solís, A. C. (2016). "La última dictadura y los barrios de la ciudad de Córdoba. Aproximación a las protestas de vecinos y a las intervenciones estatales hacia un vecinalismo permitido." En *Revista de Historia*, N° 17, Noviembre, pp. 175-201. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue. ISSN:0327-4233

URL: <http://revela.uncoma.edu.ar/htdoc/revela/index.php/historia/index>

Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política.* Madrid: Alianza Editorial.

Tilly, Ch. (2000). "Acción colectiva". En *Apuntes de investigación*, 6, s/d.

Tonon, M.C. (2011). *Estudio de los nuevos marcos políticos en ciudades con perfiles productivos. Análisis del caso Rafaela (1991-1999).* (Tesis doctoral). Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario, Rosario.

Vommaro, G. (2006). "Cuando el pasado es superado por el presente: las elecciones presidenciales de 1983 y la construcción de un nuevo tiempo político en la Argentina". En Pucciarelli, A. (coord.). *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.



La memoria de una ciudad: Ambato, el desastre y la reconstrucción social.

Estefanía de los Ángeles Parra Ortiz

“Solo una sociedad que ha perdido su identidad puede ser destruida”

Victoria Tobar

Resumen

En 1949 acontece el terremoto que paso a la Historia oficial del Ecuador como Terremoto de Ambato, a pesar de que el epicentro se localizaba en Pisayambo a 20 km de Pelileo, ciudad que fue completamente destruida y se vio obligada a pasar por un proceso de relocalización. Con el terremoto surgen dos instituciones. Por un lado, desde el poder nacional se establece la Junta de Reconstrucción denominada Segundo Terremoto por los sobrevivientes. Por otro lado, se da la conformación de los Comités Barriales de Reconstrucción desde la organización ante el desastre con una articulación de la comunidad con el alcalde Neptalí Sancho y tomando como mecanismo de trabajo la minga urbana.

Este trabajo es una revisión de la sociología del desastre, antropología del riesgo y la historia por medio de la memoria y posmemoria, considerándola como un factor fundamental para la resiliencia de una comunidad ante cualquier riesgo o amenaza. En este contexto, se presentará el caso de la ciudad de Ambato y la respuesta por parte de la comunidad en 1648, 1797 y con énfasis en 1949, considerando que este último año se da un cambio en la percepción del terremoto con la creación de la Fiesta de las Flores y las Frutas como sentido de la sociedad ambateña de respuesta de resiliencia ante la tragedia.

Palabras Clave

Terremoto de 1949; Ambato; sobrevivientes; Comités barriales; Memoria.

Introducción

El presente trabajo busca abordar la problemática de los fenómenos naturales desde su impacto social en el comportamiento de la sociedad en un tiempo extraordinario, como es el tiempo del Terremoto. En este caso particular, se presentará un estudio del Terremoto de Ambato en 1949, y la disputa de poder en la administración posterior al evento por parte del Ejecutivo con la Junta de Reconstrucción y desde la sociedad civil con la organización de la Federación de Comités Barriales Pro Reconstrucción.



La importancia del debate de estos temas desde las ciencias sociales es precisamente salir de la concepción unívoca y física sobre los fenómenos naturales y comprender que la sociedad está involucrada directamente con el nivel de impacto y afectación que puede generar un fenómeno natural en cada territorio.

Una apuesta final de este documento es posicional la conceptualización del desastre no como un hecho natural sino humano que tiene relación directa con la capacidad desde las instituciones y la sociedad de responder a un fenómeno que si es propio de la naturaleza, como lo fue el terremoto de 1949.

Este texto está pensado para todos los estudiosos de las ciencias sociales que han buscado adentrarse por medio de la historia y otras ramas similares de la ciencia a analizar hechos que han sido propios y únicos de las conocidas como ciencias duras, para plantear la importancia de la investigación social de manera trascendental en cualquier espacio de estudios científicos.

Fundamentación del Problema

El problema central es entender las formas de respuesta, organización y ruptura de los modos de vida de una sociedad cuando sucede un hecho que rompe con la vida cotidiana, como lo fue el Terremoto de 1949. En espacios extraordinarios como estos, se dan acciones sociales propias del momento, como son las olas de solidaridad, la reconstrucción social de formas de organización como la minga, disputas de poder alrededor de la distribución de la ayuda humanitaria nacional e internacional.

De la misma manera, no se cuenta con un marco general de la concepción del riesgo, amenaza y desastre. Sin embargo, la mayoría de aproximaciones de estos conceptos están relacionadas con análisis cuantitativos en la sociedad, dejando de lado el riesgo social antes y después del terremoto, vulnerabilidad social, amenazas sociales como son las acciones antisociales que pueden darse en un evento de esta categoría; y, el desastre que es el último escalón de la desorganización y la ausencia de capacidad de respuesta a un evento de la naturaleza, lo que determina mayores daños por la falta de respuesta humana a sus propios conflictos en el proceso de reconstrucción.

Metodología

Este es un trabajo ensayístico que se basa en un proyecto de investigación de Pre grado sobre el Terremoto de Ambato de 1949. Se ha utilizado como referencia documentos de archivo histórico y una presentación resumida de las entrevistas realizadas a los sobrevivientes del Terremoto, que en la actualidad son personas de la tercera edad, por



lo que en este y otros trabajos se ha buscado rescatar la cultura oral con respaldo de actas y archivos de Hemeroteca de la ciudad y la provincia.

Este trabajo también es resultado de una revisión de textos ecuatorianos y latinoamericanos en gestión de riesgos de desastres, testimonios escritos y breves publicaciones de revista que han aportado a la construcción de este estudio del Terremoto de 1949, que también se ha respaldado con una experiencia en el trabajo de la gestión de riesgos de desastres mediante la participación en un proyecto internacional con Chile para el intercambio de conocimientos en esta materia de riesgos.

Ambato, entre la fertilidad del territorio y sus amenazas

Ambato en la voz de los abuelos y en la historia oficial reconoce su pasado como un tambo, un lugar de paso, que usaban los españoles para enseñar prácticas como el pan, el vino, la agricultura, entre otras. Debido a su localización en el centro del país, en la provincia de Tungurahua, gozaba de una buena articulación comercial, que se fue fortaleciendo con el paso de los años antes de la ocurrencia del terremoto. Esta tierra se caracterizó por la bondad de los páramos y los sistemas de agua. Como señala Hernán Ibarra “Tungurahua tenía mayor despliegue económico que sus provincias vecinas” (Ibarra, 1992), y resultado de este crecimiento tenía que ver con la instalación de empresas favorecidas por la Hidroeléctrica y la cantidad de agua que permitía grandes producciones.

Un factor determinante, que resalta como virtud de los ambateños es el trabajo que tiene que ver también con el desarrollo de la ciudad industrial en la que se ha convertido Ambato. En el proceso de reconstrucciones de la ciudad, ha sido característica de su población, la cercanía con el comercio y la agricultura, actividades que generan liquidez a la ciudad posicionándola como una de las primeras ciudades en aportar al PIB nacional. También se reconoce en Ambato, la voluntad de su población de la permanencia ante cualquier adversidad, dado que su ubicación la ha colocado en medio de volcanes entrelazados en ríos y con alrededor de 16 fallas geológicas que representan altos riesgos, esta ciudad ha sobrevivido en la medida en la que sus habitantes han sido eje fundamental de la respuesta y la reconstrucción, en relación a lo que Pedro Reino, cronista de Ambato, menciona como “síndrome del terremoto” (Reino, 2015), y explica es la relación del ser humano con el territorio que habita, reconociendo los riesgos y obviándolos para continuar su vida en ese lugar, que se ha convertido en su hogar.



De acuerdo a los mapas de sismo tectónico disponibles en el Ecuador, y la historia de los terremotos en el Ecuador se estima que aproximadamente cada 100 años se da un terremoto en la ciudad o zonas muy cercanas como Riobamba. Un ejemplo de esta realidad han sido los terremotos de 1648, 1797 y 1949, que se presentan a continuación:

El primero, 1698, se da en lo que hoy conocemos como Mocha, una ciudad – páramo donde las actividades se basan en la agricultura y el turismo comunitario. En este lugar, el sismo termino con casi toda la población y pequeñas construcciones, debido a la fuerza no solo del movimiento de la Tierra sino también del deslizamiento en el Carihuairazo, la pérdida de personas fue mayor que los terremotos siguientes. La acción inmediata de acuerdo a las crónicas, menciona que ante el fenómeno natural existió un proceso de relocalización en el que los españoles se acercaron a la zona del actual Ambato para reestablecer sus viviendas y sus modos de vida. De este hecho, se narra la forma en la que los huachis, quisapinchas, pinllos –comunidades indígenas- que se encontraban en lo que hoy es Ambato fueron desplazados a las alturas en las montañas para que los españoles puedan reubicarse en el centro, tomando como medida de control y castigo colgar a los caciques de las comunidades que llegaron a oponerse ante esta decisión. De este terremoto, se originó la mítica leyenda de la Virgen de la Elevación como protectora de los movimientos de la Tierra, por esa razón en la actualidad se encuentra la iglesia que lleva su nombre y su figura en Pilahuin, Tungurahua.

El segundo terremoto de la Historia de Ambato, 1797, se da en Riobamba y uno de los estudios más importantes sobre este fenómeno natural se da en el 2000 por Jose Egred a solicitud de la municipalidad de Riobamba. En base a su texto, se puede analizar como este terremoto genero un impacto fuerte a Riobamba, lo que determino “que no pudo continuar su desarrollo al mismo nivel de antes” (Egred, 2000). La respuesta social fue el levantamiento de los indígenas en contra de la repartición de la asistencia y de las tierras. En Ambato, este fenómeno también marco la ciudad debido que para este tiempo, Ambato buscaba convertirse en villa, sin embargo se mantenía como un tenientazgo de Riobamba. En 1797, se da también una concepción mítica y religiosa del terremoto, sobre todo con el relato del encuentro del cuadro del Cristo del Consuelo, que en la actualidad se encuentra en la Iglesia de Patate, y las personas que viven en esta ciudad ubicada entre Pelileo y Baños, señalan que a pesar de que existió la intención de algunas comunidades de llevarse la imagen del Cristo, esta se encontraba



muy pesada cuando intentaban moverla de su lugar, Patate. Este Cristo fue denominado como “Señor del Terremoto”, a quien las comunidades rezan para que cesen los eventos adversos de la naturaleza.

En el último caso, que es el objeto principal de estudio de este trabajo, el terremoto de 1949, acontece de manera diferente desde el principio de su nombre, al ser conocido nacional e internacionalmente como Terremoto de Ambato, a pesar de que el más alto impacto fue en la zona de Pelileo viejo, donde aún se puede observar una iglesia que recoge la memoria de quienes caminaron sobre los escombros de la ciudad. Hoy en día, se encuentra el Pelileo Nuevo que representa la reconstrucción de la mano del crecimiento de la ciudad industrial con la fabricación de jeans en la zona del <<tambo>>. De este primer antecedente, es necesario mencionar el trabajo artístico visual de Gerardo Merino con el documental Tierra Adentro, donde se puede evidenciar las distancias en la atención del terremoto para quienes vivían en Pelileo con quienes habitaban el centro de Ambato.

El 05 de junio de 1949, se da un terremoto de 6.5 que afectó 90% la ciudad de Ambato. Este suceso conocido como fenómeno natural se da en la presidencia de Galo Plaza Lasso, quien en medida de las pocas posibilidades de respuesta al evento hace un llamado nacional e internacional para atender el efecto del terremoto y declara Estado de emergencia, lo que permite que el ejército se ubique en el territorio ambateño y se designe desde el poder ejecutivo una Junta de Reconstrucción, que en principio estaba presidida por Humberto Albornoz para la administración de la Reconstrucción, y que finalmente fue liderada por el entonces Arzobispo de Ambato, Bernardino Echeverría. Para 1949, la realidad de la iglesia era ambigua, por un lado en este año se había construido la Diócesis de Ambato, y a la vez existía una fuerte corriente de mormones en la ciudad. En ese contexto, el terremoto también fue un espacio y oportunidad para la iglesia de reestablecer la fe en el Catolicismo y combatir desde la religión las posturas socialistas, que habían tomado fuerza con el que entonces era el alcalde de Ambato, Nepalí Sancho de tendencia socialista, que inmediatamente ocurrido el terremoto aprueba con el Consejo Cantonal, una ordenanza para delegar a la ciudadanía acciones para la reconstrucción de Ambato y los lugares seguros de albergues como la definición de comisiones de trabajo.



Ambato en 1949, el terremoto y la organización ante el desastre de la Junta de Reconstrucción

Para 1949, Ambato tenía una consolidación de sus barrios, había aproximadamente 5000 familias y la sociedad se organizaba desde el espacio de los vecinos. En ese caso los barrios desde sus directivas iniciaron trabajos de levantamiento de escombros, vigiliias nocturnas para las plazas donde se ubicaban las carpas de albergues temporales, mingas urbanas de reconstrucción y censo de la población con el fin de colaborar en la repartición de la ayuda humanitaria que llegó de varios países, de manera especial en el caso internacional desde Argentina; y, a nivel nacional desde Guayaquil.

A pesar de que los apoyos nacionales e internacionales generaron un fondo para la reconstrucción, de acuerdo a los relatos de los sobrevivientes y un debate sobre el uso de fondos que se da en el Congreso Ecuatoriano en 1951, se puede evidenciar que los fondos fueron utilizados en su mayoría para la construcción de la Catedral de Ambato, y también para fines personales.

En el marco de la necesidad de viviendas de la población, que es una de las principales necesidades que no logra responder la ayuda humanitaria internacional o nacional, se da la minga urbana, propia de los pueblos andinos como respuesta a lo que el Estado no puede dar cuenta y como mecanismo de organización desde el nivel comunitario para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un territorio. En el caso ecuatoriano, poco se ha escrito de la minga urbana y menos sobre el enfoque de esta minga para la reconstrucción en casos de riesgos de desastres. Sin embargo, es necesario mencionar el trabajo de Darío Guevara que en su estudio sobre la minga señala: “está destinada a la construcción de templos, casas (...) o mejoras urbanas, en donde los municipios se ven impotentes para resolver problemas urgentes” (Guevara, 1957).

En el caso de Ambato, la minga precisamente representó la incapacidad del estado y de la Junta de Reconstrucción para atender la emergencia y la reconstrucción. Se construyeron 1000 casas para una población que únicamente en el centro registraba 5000 familias. De la reconstrucción social únicamente los barrios se hicieron cargo, mediante el trabajo comunitario, que fue varias veces limitado por el estado y la iglesia. Este último actor considerando que los domingos son de misa y de descanso para Dios, solicitó al ejército tome las medidas correspondientes con todos quienes trabajen en minga los domingos porque esta actividad impedía la asistencia a la iglesia.



A diferencia de la Feria que es algo reconocido de la ciudad y que en años anteriores cambio de día por las mismas presiones de la Iglesia; las mingas continuaron y se fortalecieron con el respaldo de la Federación de Comités Barriales de Reconstrucción de Ambato que se institucionalizaron el 20 de septiembre de 1949. Se dieron movilizaciones desde esta Federación en apoyo al alcalde Nepalí Sancho hasta su último día como autoridad de la ciudad, frente a los abusos de la Junta de Reconstrucción se manifestaron también; hecho que se evidencia en la demanda de algunos ambateños en el Congreso por el mal uso de los fondos (Sancho, 2015) de la Junta de reconstrucción.

Esto es algo desconocido por la mayoría de la sociedad, información que no paso a la historia oficial como un “intento de querer borrarlo todo” (Stainer, 2012), la memoria probablemente es lo más frágil y a la vez más importante que tenemos como parte de la identidad de una sociedad. La memoria teje lazos, da lugares y une mentes distantes. Uno de los elementos importantes para el trabajo de la memoria es el recuerdo. En la actualidad los ambateños recordamos el terremoto únicamente como esa conexión con la creación de las fiestas mas importantes de la ciudad. Sin embargo, olvidamos las críticas de los abuelos sobre el principio mismo de la fiesta y el fin del terremoto con un desastre infinito. El recuerdo está tanto en la experiencia de lo vivido directamente, como las cosas no vividas. Por ejemplo, el recuerdo en abismo, recuerdo que mi padre recordaba. Esto es lo que Victoria Sarlo denomina como posmemoria, y es la memoria que guardamos los hijos y los nietos del terremoto de Ambato de 1949. Sin embargo, es importante, ser minuciosos con lo que hemos escuchado y con lo que se ha encontrado para poder determinar todo lo que implicó uno de los terremotos más importantes en la Historia del Ecuador.

La sociedad que se organiza es la sociedad que queda después de un fenómeno natural y reconoce inconscientemente sus fortalezas y sus vulnerabilidades. La vulnerabilidad social es uno de los temas que tiene un campo amplio de estudio y que sin embargo faltan trabajos de investigación alrededor de la temática. Algunos autores como Smith o Lavell toman la vulnerabilidad social desde algunos puntos, que se vinculan con la teoría del desarrollo y de la dependencia, por ejemplo, al ver la capacidad de respuesta de unos países frente a otros, no solo desde sus recursos.

Ha existido una tendencia a vincular los fenómenos de la naturaleza y sus consecuencias en todos los niveles, no solo con las creencias espirituales o míticas, sino también como propias de la naturaleza. Sin embargo Oliver Smith, plantea que a



los desastres se los debe ver “como funciones de orden social en marcha, su estructura de relaciones ambientales, humanas y el sistema más grande de procesos históricos-culturales, como el colonialismo y el subdesarrollo” (Smith, 1995), por lo que “el desastre no es natural sino humano” (Parra, 2018), y tiene que ver fundamentalmente con el comportamiento del estado, el gobierno local y la ciudadanía en la administración después de un fenómeno que si es propio de la naturaleza, como en este caso es el terremoto.

La voz de los sobrevivientes

Algunos sufren con la vida, y otros gozan con la muerte

Carlos Rubira Infante

Sobrevivientes, es la autodenominación que se dieron Francisco Suarez, Carlos Cordova, Bernardo Pozo, Victoria Tobar, Laura Santa María, Bertha Vargas; pintor, poeta, obispo, escritora, abuelas y madres. Este término es el que resalto siempre en entrevistas realizadas en el 2017 a quienes fueron testigos del terremoto y de la administración en desastre en 1949-1951. Cada sábado, con una taza de café, biscochos, o el aire de las plazas de la ciudad me reuní con Panchito, Carlitos, Bernardo, la Toya, Laurita y Bertha de Velasco, los nombres que preferían y por los que fue posible establecer una relación de amistad e investigación para llegar a la cultura oral.

Precisamente, en temas que impactan a una población dada la situación de un tiempo extraordinario (Echeverría, 2001), como es el tiempo del terremoto es fundamental el reconocimiento de “la cultura oral como popular” (Ginzburg, 1999), para entender lo que está ausente de la bibliografía del riesgo y el desastre, e incluso del archivo y la hemeroteca.

Todos los ambateños y ambateñas que compartieron su voz de la experiencia, repetían dos palabras sobrevivientes y tragedia, porque vieron morir a sus amigos, familia y un poco a ellos mismos. La sobrevivencia es para ellos la fortuna de la suerte y a la vez la cercanía entre la vida y la muerte. Otra palabra que se repetía fue la de “tragedia” no de la forma helénica que narra Troya, sino mas bien como herencia del Judaísmo (Stainer, 2012) vinculado a la espiritualidad, creencias y fé.

En resumen, el recuerdo narra como vieron caerse las paredes de adobe que entonces era el material con el que se construían las casas, y no solo la infraestructura sino las familias al quedarse incompletas con niños huérfanos que fueron entregados a otras provincias y con hermanos, padres, hijos con dolor permanente de la ausencia. Lo



primero que se sintió fue el frío de la tarde, considerando que este hecho acontece a las dos, la hora del almuerzo, donde algunos salían de sus clases, otros se preparaban en la iglesia la matriz que era el resultado de las limosnas de 30 años de la población; otros, jugaban con sus amigos, caminaban por las calles que no eran muchas y no eran grandes, apenas había 8 taxis y aún se usaban carrozas, caballos o burros dependiendo el nivel social al que pertenecía cada ambateño o ambateña.

Cuando la noche llegó, en el centro de Ambato la gente se agrupaba en las plazas y dos parques; 12 de noviembre y parque Montalvo. Este último, reconocía por primera vez el ingreso del pueblo, debido a que antes del terremoto mantenía las puertas cerradas y estaba vigilado por celadores con el fin de que no ingresen los campesinos o los indígenas ya que en este espacio “público” se daban las fiestas de las elites ambateñas. En ese mismo lugar se establecieron carpas y con algunas hojas de naranjo, se vendieron aguas para pasar la noche y el día siguiente comenzar con lo que en principio había dejado el terremoto.

Al día siguiente, las acciones de solidaridad iniciaron con la ayuda de los vecinos para levantar los escombros y rescatar a la gente que se había quedado atrapada en sus casas o en la iglesia que era el punto con mayor aglomeración de personas. Con algunos rescatados y varios muertos, continuaron las actividades de la sociedad como el sistema de ferias. Los campesinos bajaron del campo y vendieron los productos a menor precio para que la gente no se muera del hambre, la ayuda también fue generosa y recuerdan como escuchaban que muchos países apoyaron con ayuda humanitaria, alrededor de cinco millones de sucres según consta en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A 15 días del terremoto, caminaron por las calles liderados por Blanca Martínez de Tinajero para hacer una promesa colectiva de quedarse en Ambato a reconstruir su ciudad, debido a que algunas personas optaron por salir de la ciudad. Otro hecho que fortaleció la identidad para trabajar por la ciudad fue la letra que escribió Carlos Rubira Infante en la canción del Altivo Ambateño, que hasta la actualidad levanta las emociones y los recuerdos de la población, y señala:

“Yo de esta tierra no he de alejarme porque es el suelo donde nací, soy ambateño que con el alma quiero a mi tierra con frenesí”

Con estos antecedentes, no pueden dejar de recordar también como la Junta de Reconstrucción no respondía a los llamados de la ciudadanía, cuando iban a sus



instalaciones para reclamar por alimentos o cobijas, y recibían como respuesta “Si quieren, trabajen”; y, eso fue lo que hicieron algunos ambateños con el establecimiento de negocios y capacitaciones que brindó la cooperación internacional, de manera especial la cooperación alemana, argentina y norte americana se generaron nuevos espacios de oficios para trabajar en actividades comerciales. Hace algunos años se encontraron todavía en las bodegas de la Junta de reconstrucción comida y cobijas que no llegaron a ser repartidos cuando era un requerimiento de sobrevivencia de la población.

Ante el uso de los fondos en una Catedral que implicó el ayuno de la gente, debido a los intereses del entonces obispo de Ambato Bernardino Echeverría, quien también fue presidente de la Junta de Reconstrucción, la sociedad decidió movilizarse en el desfile del 25 de febrero de 1951 denominado Desfile de la Sanción, para exigir se rindan cuentas del uso del dinero que se había recibido de otros países. En principio, los ambateños y ambateñas habían aportado durante el período de 30 años para la construcción de la Matriz que fue la iglesia central de Ambato y se derrumbó en el terremoto. Con los fondos de la reconstrucción bastaron dos años para que la Catedral se construya e inaugure celebrando una misa por la reconstrucción de la ciudad.

En el mismo mes, febrero de 1951 en el que se había realizado la movilización en contra de Bernardino Echeverría se establecía desde el Centro Agrícola Cantonal la Feria Agrícola de las Flores y Frutas que después de la declaratoria de la primera reina de Ambato, Maruja Cobo, paso a llamarse Fiesta de las Flores y las Frutas, mismas que se celebran cada año hasta la actualidad con la única variación en los 60, de la transición de ser un evento auspiciado por un gremio de socios, a contar con un presupuesto municipal para la creación del Comité Permanente de la Fiesta de las Flores y Frutas, desde entonces se han establecido alrededor de 20 ordenanzas municipales en favor de la organización de la Fiesta de las Flores y las Frutas, donde las actividades principales son la elección de la Reina de Ambato y también el Desfile de la Confraternidad, que al igual que el primer desfile de reconstrucción que realizaron los ambateños y las ambateñas, inicia en el Cementerio Municipal como símbolo de renacimiento desde las cenizas, por lo que Ambato es conocida también como Ciudad Fénix del Ecuador.

A dos años del terremoto, se hacía una fiesta y la gente había comenzado a construir sus viviendas, con un Plan Regulador que duró aproximadamente 13 años en terminar de ser ejecutado, a pesar de que se habla de una rápida reconstrucción en un período



de dos años. Esta planificación no considero completamente el tema de las viviendas, con nuevos espacios de construcción y con la deuda de una Junta de Reconstrucción que en lugar de favorecer la organización desde debajo de la población, llego a ser considerado como Segundo Terremoto, el ejemplo claro del desastre de la administración. Un ejemplo de que las viviendas llegaron de manera principal al centro de la ciudad es que en las zonas rurales de los alrededores se puede visualizar hasta la actualidad casas construidas a base de adobe y de piedras sin lineamientos de planificación sismo-resistente o similar.

Resultados

Conclusión

Ambato, ha vivido terremotos a lo largo de su historia y mientras la tierra este en permanente movimiento, nada puede evitar que por la zona geográfica en cualquier momento ocurra nuevamente un terremoto que cobre la vida de miles de personas. A 70 años de este suceso, los sobrevivientes son las personas adultas mayor que como mencionaban en las entrevistas se encuentran frecuentemente en las velaciones y funerales. Las dos generaciones siguientes, recuerdan el discurso de los abuelos únicamente desde el sentido de ambateñidad que ha generado la Fiesta, olvidando las consecuencias de la falta de prevención ante un fenómeno natural; y, la necesidad de una cultura ante el desastre para evitar las acciones antisociales que pueden darse en un evento similar.

Ambato, está situado en el mismo lugar con una modernización de la ciudad que en algunos casos de construcciones aumenta el riesgo y vulnerabilidad. A pesar de que las ciudades se sigan cayendo y reconstruyendo, los edificios o casas son bienes que con el tiempo o de acuerdo a las capacidades del estado y de la población sobreviviente se puede rescatar. Sin embargo, en el caso de las personas la vida es algo que no se encuentra de vuelta, y tenemos la necesidad de ser una sociedad informada para ayudarnos y poder ayudar a los demás frente a estas eventualidades.

Del terremoto de Ambato de 1949, lo que más se puede destacar es la organización desde debajo de la sociedad, el sentido de permanencia que permite reconstruir un territorio en base a la minga y la vecindad, con el trabajo individual y colectivo. Estos niveles de organización que en la actualidad se han fracturado con la propia concepción de vecindad o barrio que no es la misma de los años 50, es una variable fundamental para pensar la vulnerabilidad de una ciudad.



Una de las frases más importantes de las entrevistas es la que se encuentra en la primera página y dice: “Solo una sociedad que ha perdido su identidad, puede ser destruida”, esta es una idea clara y clave para generar comunidades resilientes. Este año se recordaron 70 años del terremoto con la participación de los sobrevivientes para narrar los días de tragedia donde el frío y el hambre no eran los enemigos más difíciles que había dejado el terremoto, sino precisamente la administración de los seres humanos que determinaba un verdadero desastre, pues en medio del caos y de la crisis social, existieron varios hechos antisociales por parte de las propias autoridades de la ciudad.

Este trabajo es una invitación a repensar la inversión que estamos realizando como país y como sociedad civil en mecanismos de prevención ante el riesgo de desastres. Si aproximadamente cada 100 años se produce un terremoto en la ciudad de Ambato, estamos en un margen de tiempo en el que podría ocurrir nuevamente un movimiento similar, con las mismas construcciones y la misma ideología del desastre. Por eso es fundamental, trabajar en una cultura del desastre a la que aporta la cultura oral para aprender de los errores y recoger las acciones valiosas que resultaron en este tiempo extraordinario.

La generación de comunidades resilientes es la actual apuesta de los instrumentos de Planificación Internacional como el Marco Sendai, donde no se puede pensar en territorios resilientes sin considerar el factor social y cultural de las poblaciones que habitan estos espacios.

Bibliografía

Echeverría, B. (2001). *Definición de la Cultura* .

Egred, J. (2000). *El terremoto de Riobamba* . Riobamba : Abya Yala .

Ginzburg, C. (1999). *El queso y los gusanos* . Barcelona : Muchnick .

Guevara, D. (1957). *Las Mingas en el Ecuador, Origen, tránsito y supervivencia* . Quito: Editorial Universitaria .

Ibarra, H. (1992). Ambato, las ciudades y los pueblos en la Sierra Central Ecuatoriana (1800-1930). En E. Kingman, *Ciudades de los Andes* . Quito .

Parra, E. (2018). *Análisis Social Post Terremoto: El caso de Ambato en 1949-1951*. Quito.



Reino, P. (2015). Ambato y su pasado histórico. *Revista Ambato* .

Sancho, N. (2015). El terremoto de Ambato en 1949: Política y Administración de la Reconstrucción. En J. Sanchez, *Los fenómenos naturales en la historia del Ecuador y el Sur de Colombia* . Quito : CCE.

Smith, O. (1995). *Desastres y Sociedad* . RED.

Stainer, G. (2012). *La muerte de la tragedia* . México : Fondo de Cultura Económica.



La restricción de la participación política en el Departamento del Cauca: Entre las élites y el conflicto

Daniella Beltrán
Luis Felipe Rodríguez
Julie Paola Tibocho
Angie Daniela Tinoco

Resumen

Después de tres años de firmado del acuerdo de paz en Colombia, los asesinatos a líderes sociales continúan, siendo la mayoría de estos en el departamento del Cauca. A partir de esta situación, nos interesó identificar los cambios en la participación política de la sociedad caucana contemplando las siguientes dimensiones: actuación de los movimientos sociales, el ejercicio de movilización y protesta pacífica y la actividad de los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Para el desarrollo de este propósito utilizamos una estrategia metodológica cualitativa, recurriendo a fuentes primarias y secundarias. La investigación demostró que: los movimientos sociales en el Cauca tienen una baja incidencia en las políticas públicas; La protesta y la movilización social se han visto coartadas por actores no identificados y por la fuerza pública; y son pocas las iniciativas ciudadanas que logran consolidarse como medios alternativos de comunicación.

Palabras clave

Participación política; Movilización social; Movimientos sociales; Medios de comunicación; Conflicto armado.

Introducción

En Colombia, el conflicto armado mantuvo y reprodujo la distancia entre las expectativas de la sociedad civil y lo que realmente obtiene en el orden social vigente, por eso, el acuerdo de paz firmado en el 2016 y especialmente el punto dos donde el Estado y la guerrilla de las FARC se comprometen a garantizar la participación política es una oportunidad para ampliar la democracia colombiana.

En este contexto, para nosotros resulta fundamental que la academia y especialmente las ciencias sociales anuden esfuerzos en defensa de los compromisos pactados en el acuerdo de paz. Esta investigación se adentra en los procesos de participación política de la sociedad civil en el departamento del Cauca, con la convicción de que visibilizar, entender y amplificar las expresiones y demandas comunitarias y sociales es un paso



indispensable hacia la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en zonas de posconflicto.

En coherencia, en esta ponencia se exponen expresiones de la participación ciudadana en el Cauca, tales como: la movilización y protesta, la conformación y actividad de movimientos sociales y el surgimiento o resistencia de los medios de comunicación comunitarios, concentrándonos especialmente en los municipios: Santander de Quilichao, Piendamó y Caldonó.

Fundamentación del problema

Las zonas rurales colombianas donde más cruento ha sido el conflicto, presentan los niveles más bajos de participación política en comicios electorales. Esto tiene que ver con la restricción o filtro al ejercicio de los partidos políticos y sus candidatos, fijación de cuotas políticas, control del gobierno local, acuerdos entre grupos armados y políticos locales, dinámicas de intimidación y presión electoral. Como efecto la sociedad civil en estos territorios durante el conflicto se fue alejando del Estado y en palabras de Ronsavallon (2007) construyendo espacios de contrademocracia, entendida como procesos políticos que nacen, se disputan y gestionan en la sociedad civil. Este concepto agrupa acciones conjuntas en función de resolver problemas comunes, tales como la movilización social en protesta a lo instituido, la denuncia que pretende transformaciones sociales, la lucha de poblaciones vulnerables, redefinición de espacios públicos, prácticas ciudadanas, la disputa por sentido común, la valoración de la diversidad y la búsqueda de la equidad (Arias Cardona & Alvarado, 2014)

En el punto 2 del acuerdo de paz las partes reconocen los problemas estructurales de la participación política institucional y el valor de las organizaciones de base para el robustecimiento de la democracia, de manera que se comprometieron a dar garantías y derechos para el ejercicio de la oposición política, incentivar mecanismos democráticos para el ejercicio de la participación ciudadana y promover una mayor participación en la política nacional, regional y local (Mesa de conversaciones, 2017).

En cuanto el avance de la implementación de este punto, varios informes han coincidido en el bajo nivel de cumplimiento, entre estos, el realizado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria-NIMD- asevera que al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos “tan solo el 10% de las 94 tareas previstas fueron completadas, el 41% estaban en desarrollo y la mayoría de ellas, el 49%, ni siquiera habían empezado a ejecutarse” (NIMD, 2019, pág. 21).



El avance en los mecanismos democráticos para la participación ciudadana y la participación directa en políticas públicas ha sido mínimo. En este tema el acuerdo contemplaba: Garantías para los movimientos y organizaciones sociales; Garantías para la movilización y la protesta pacífica; Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales; Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad; Control y veeduría ciudadana y política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa (Mesa de conversaciones, 2017).

En este marco, la situación del Cauca llama especialmente la atención en tanto: la mayoría de líderes sociales asesinados en el país provienen de este territorio, abundan las denuncias por violación a derechos humanos, y el conflicto social se ha expresado en la movilización y el ejercicio de la protesta.

Este departamento es uno de los más rezagados del país, allí coexisten grandes latifundios al norte del territorio y agricultura para autoconsumo y minifundios al oriente, occidente, centro y sur. Esta situación ha contribuido a la concentración de la tierra en la zona norte en donde los predios son más costosos, haciendo que el acceso y uso de la tierra sea conflictivo (Duque, 2015), así: “el 33% de la tierra está en manos de 90 propietarios con extensiones de más de 2000 hectáreas (...) y la superficie de los predios de menos de 100 hectáreas representan el 42,48% de los predios en manos de 82.761 propietarios” (Duque, 2015, pág. 21).

Adicionalmente en este territorio se presentan condiciones que agudizan el conflicto social, económico y armado: presencia de grupos armados legales e ilegales, cultivos de coca, ubicación estratégica, megaproyectos de desarrollo y conflictos interétnicos (Consejo Departamental de Paz; Gobernación del Cauca; Espacio Regional de Paz, 2015).

Después de tres años de firmado el acuerdo de paz con las FARC y ante la situación problemática descrita nos preguntamos ¿El contexto de posconflicto y la firma del acuerdo de Paz en el 2016 ha mejorado las condiciones de participación e involucramiento de la ciudadanía caucana en los movimientos sociales, la movilización y la difusión mediante medios de comunicación alternativos y comunitarios?



Metodología

En esta investigación utilizamos una estrategia cualitativa, recopilando datos cuantitativos y cualitativos, haciendo lectura y análisis de fuentes secundarias (informes de cumplimiento del acuerdo de paz, prensa escrita, documentos oficiales, documentos de imagen y sonido) que permiten conocer como ha sido el ejercicio de la participación política en el Cauca. El análisis de datos se realizó mediante la sistematización en tres dimensiones de análisis: movilización social, movimientos sociales y medios comunitarios alternativos. La muestra seleccionada fueron movimientos sociales y medios comunitarios alternativos de los municipios de Piendamó, Caldon y Santander de Quilichao.

Resultados y Discusión

Movilización y protesta

La movilización y protesta son la manifestación de urgencia de un segmento de la sociedad que ha agotado o desconfía de las vías institucionales y exige atención de sus demandas por parte del Estado (Personería de Medellín, 2010).

Antes de la firma del acuerdo, 2013 a inicios del 2016, las movilizaciones sociales más destacadas giraron en torno a los siguientes asuntos: el paro agrario nacional en contra de los lineamientos del plan nacional de desarrollo (2010-2014), la derogación del tratado de libre comercio (2013), la reivindicación de la soberanía indígena de los territorios, la gran movilización por la paz en apoyo al proceso de paz y finalmente en abril del 2016 la denuncia a la violación de derechos humanos.

En el 2017 la minga indígena denominada por *la defensa de la vida, el territorio, la paz y el cumplimiento de los acuerdos*, realizó en el Cauca una nueva movilización orientada a exigir el cumplimiento del acuerdo de paz, específicamente el capítulo étnico. Esta movilización dejó 10 manifestantes heridos, amenazas del cuerpo policivo y uso indiscriminado de armas de fuego contra la población como lo documentaron distintos portales informativos como el Espectador (2017), el Tiempo (2017) y portales indígenas de la ONIC (2017) y el CRIC (2017).

Respecto a las movilizaciones del año 2018 y lo transcurrido del presente año, en menos de dos años se han registrado la misma cantidad de movilizaciones de todo el cuatrenio anterior. Las manifestaciones de este último tramo no solamente han exigido el cumplimiento de lo pactado en los acuerdos de paz, sino, especialmente la urgencia de garantizar la protección de los líderes sociales y los espacios de participación de las comunidades. En el desarrollo de estas manifestaciones la comunidad indígena registró



más de 50 heridos por exceso de fuerza del ESMAD (Radio Súper Popayán, 2019) (El Tiempo, 2019).

La mayoría de las movilizaciones no han logrado una respuesta a sus demandas y los pocos acuerdos logrados han sido incumplidos por parte de los gobiernos que además han empleado estrategias de deslegitimación aplicadas por los cuerpos policivos que consisten en infiltraciones, amenazas, acusaciones y vulneración reiterada de los derechos humanos de quienes se movilizan.

Se puede destacar que el proceso de paz y la firma del acuerdo sirvió para ampliar las demandas de las comunidades hacia el estado, temas como la participación política, la reforma agraria, la protección y salvaguarda de los derechos humanos se han ido sumando a su agenda.

Sumado a la violación de derechos humanos en las movilizaciones, la red de derechos humanos del suroccidente colombiano Francisco Isaías Cifuentes ha presentado en sus informes especiales cifras aproximadas sobre la vulneración al derecho internacional humanitario y los derechos humanos en el Cauca, en el último quinquenio: 20 ejecuciones extrajudiciales, 30 amenazas colectivas, 40 amenazas individuales, 50 ataques a la honra y la reputación, 3 atentados, 5 desapariciones forzadas e involuntarias, 40 detenciones arbitrarias, 50 injerencias arbitrarias o ilegales en la vida familiar y privada, 40 casos de vulneración a la libertad de asociación a fundar sindicatos y afiliarse, 12 casos de trato cruel inhumano y degradante, 10 casos de tortura, 5 ataques a la libertad de tránsito y locomoción, 4 ataques a la propiedad privada, 9 homicidios intencionales de personas protegidas, 50 ataques a bienes civiles, 13 ataques a misiones humanitarias, 37 ataques indiscriminados y más de 1300 personas desplazadas de su territorio (REDDHFIC, 2013-2019). Según esta organización las acciones de vulneración de derechos superan estas cifras aproximadas, difíciles de cuantificar por la falta de registros oficiales.

Aunque se ha solicitado protección al Estado por las condiciones de vulnerabilidad de líderes y lideresas sociales, en lo corrido de los últimos 3 años, según lo señaló la REDDHFIC (2017, 2018, 2019) han sido asesinados en el departamento del Cauca más de 150 líderes y lideresas sociales y comunitarias, posicionando a este departamento como aquel con la mayor cantidad de líderes y lideresas asesinados en todo el país, con la particularidad de que la tercera parte de estos crímenes recaen sobre activistas indígenas con especial reiteración en los municipios de Corinto y Santander de Quilichao.



Estas cifras evidencian la falta de garantías en el Cauca para el ejercicio de la protesta y el activismo político y social dado que sus promotores colocan en riesgo su vida y el Estado ha sido ineficiente a la hora garantizar los derechos de libre expresión y de libertad de reunión y a su vez el derecho a la vida.

Movimientos sociales

El estudio de los movimientos sociales se concentró en las vías dispuestas desde los planes municipales para promover su participación y el ejercicio de estas organizaciones con las comunidades.

De acuerdo al *sexto informe trimestral de verificación de la implementación del Acuerdo final de paz en Colombia* realizado por el CINEP (2019) el *plan nacional de Desarrollo pacto por Colombia (2018-2022)* no estipula fuentes de financiación para el punto de participación política por lo que la implementación de las acciones y compromisos en materia de participación ciudadana por parte de las autoridades locales encuentra fuertes restricciones.

Por su parte, el *plan de desarrollo 2016 -2019 “Santander de Quilichao, compromiso de todos”*, establece tres programas que promueven la participación de las comunidades y movimientos sociales del municipio: La reintegración, camino hacia la paz; Las comunidades étnicas y campesinas, compromiso de todos y todas; y democracia participativa para la gobernabilidad territorial. Aunque en cada uno de estos programas se establecen metas de resultado, promoviendo capacitaciones, fortalecimiento y apoyo a los procesos de las comunidades territoriales, no tiene en cuenta las demandas propias de la ciudadanía, ya que no comprende cuestiones como la reforma del ordenamiento territorial, garantía del uso del suelo, por el contrario, la mayoría de metas se relacionan con el desarrollo del sector urbano y su modernización.

En el plan de desarrollo del municipio de Caldon y el informe de gestión *“Caldono Construcción Social con Respeto y Equidad, Vigencia 2018”* se estipulan procesos de participación como la capacitación de los líderes de las juntas de acción comunal y la capacitación a mujeres. Aunque resultan ser acciones significativas, institucionalmente tampoco responden a las demandas de los movimientos y a las necesidades del uso y la propiedad de la tierra y contradictoriamente promueve el fortalecimiento de la extracción minera a pesar del rechazo de las comunidades indígenas a esta actividad.

Por último, aunque el *Plan de Desarrollo del municipio de Piendamó - Tunía “el Cambio es Posible”*, incluye en sus líneas de acción a las comunidades indígenas, afro y



campesinas y pretende implementar procesos de capacitación, veeduría y concertación; las demandas comunitarias no se ven reflejadas dentro de los objetivos y metas del plan dado que sobrepone la economía naranja promovida por el gobierno nacional a través de proyectos productivos, no aplicables a las Zonas de Reserva Campesina ni a los procesos de producción cooperativas.

En este marco contextual, los movimientos sociales no tienen la posibilidad de ser partícipes de la formulación ni de la implementación de las políticas municipales, reflejando la omisión de las vías institucionales a sus demandas. Por lo cual aumenta el distanciamiento de los movimientos sociales con las instancias políticas e institucionales del estado, donde no se ven representados, en los párrafos siguientes haremos alusión explícita a los movimientos más importantes del territorio: indígenas, campesinos y afro presentes en los municipios de Piendamó, Santander de Quilichao y Calono.

Uno de los movimientos indígenas más importantes del Cauca es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN-, creada en 1994 como una asociación para la promoción de luchas de resistencia, salvaguardia territorial, y la exigencia hacia el Estado de garantizar condiciones de vida digna (Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca, 2016).

Según la revista Global hoy la ACIN, con base en una metodología participativa a través de asambleas se evalúan y se desarrollan proyectos comunitarios enfocados a la educación, la salud, la mujer y la producción en las veredas de los resguardos.

Por su parte, los movimientos campesinos pretenden que su derecho de acceso a tierras sea garantizado así como la formalización de la propiedad, la consolidación de distintas figuras territoriales, como es el caso de las Zonas de Reserva Campesina y en años más recientes, la figura de los Territorios Agroalimentarios impulsados por el Coordinador nacional agrario (CNA), a pesar de tener sustento legal no han sido reconocidos por los gobiernos de turno, dificultando el acceso a la propiedad de la tierra y repercutiendo negativamente las condiciones de vida de los campesinos.

En el territorio se han conformado movimientos campesinos como la asociación agropecuaria del municipio de Piendamó AMUP, la Asociación de Trabajadores Campesinos Pro Zona de Reserva Campesina de Piendamó ATCP, la Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia y la Junta municipal de Santander de Quilichao ANUC.



Por último, las comunidades negras se encuentran organizadas en consejos comunitarios que se agrupan en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-ACONC.

Esta organización étnica territorial está constituida por 41 consejos comunitarios étnicos y de negritudes del norte del Cauca presentes en 10 municipios de la región, siendo este uno de los movimientos más representativos de la comunidad afro en la zona. Procuran la defensa del territorio ancestral, la exigibilidad de los derechos humanos, el rescate, y desarrollo propio (Asociación de Consejos comunitarios del Norte del Cauca, 2019). El trabajo actual de la ACONC apuesta por la consolidación e implementación del Plan de vida inter-étnico e intercultural, como una hoja de ruta para el desarrollo de las comunidades de la región.

Ahora bien, aunque una vez firmado el acuerdo de paz, el Estado se comprometió a promover y fortalecer todas las formas de participación y abrir mayores canales de diálogo entre los movimientos y la institucionalidad, ante falta de representatividad de sus demandas en el aparato político e institucional estatal, las organizaciones se han visto obligadas a auto-gestionar sus intereses y demandas. En el caso de las comunidades afro sobresale el Plan de Vida Interétnico e Intercultural como una herramienta para el relacionamiento armónico entre los pueblos y comunidades del norte del Cauca, por su parte, las comunidades indígenas se han caracterizado por sus acciones colectivas de movilización y protesta organizadas a través de las mingas, mientras que las comunidades campesinas han logrado promover los procesos de legitimación social de Zonas Reservas Campesinas.

Los movimientos sociales en el Cauca han logrado representar y abanderar intereses de la sociedad civil ante la desconfianza, la falta de garantías y voluntad política de los actores estatales locales y nacionales, gestionando sus demandas sin dejar de exigir al Estado acciones que garanticen sus derechos.

Medios de Comunicación Alternativos

En palabras de Walter Benjamin (2013) urge cepillar la historia a contra pelo, tomar distancia de los relatos dominantes, recuperar los reclamos de los dominados y redimir la historia, es decir, buscar en el pasado lo que nos permita acercarnos a la utopía.

En Colombia los medios de comunicación tradicionales se han convertido en amplificadores de la representación de los poderes dominantes, haciendo que el relato más difundido del conflicto armado sea simplificado, ausente de perspectiva histórica y



de contextos políticos, donde el horror se banaliza y se refuerza la intolerancia, mientras se reduce a la sociedad al papel de víctima pasiva (Bonilla Vélez & Tamayo Gómez, 2006)

Así uno de los retos que sobresalen es visibilizar las voces y rostros de las mayorías, siendo necesario trabajar en la cultura política y profesional para fortalecer otros criterios informativos en los que la paz se convierta en un asunto de interés público.

Como lo expone Isabel Rauber (2016) la posibilidad de enfrentar “el modo de articulación política sociocultural que impone, reafirma y recrea el poder (económico, político, cultural) dominante” (p.31) subyace en los procesos políticos populares como los medios alternativos/comunitarios (MAC) ya que estos surgen desde y para comunidades invisibilizadas por los medios de comunicación tradicionales.

Para estudiar el impacto que ha tenido el punto 2.2.3 del acuerdo final de paz “Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales” en los municipios de estudio; se utilizaron tres dimensiones de análisis: 1) Surgimiento de medios de comunicación comunitarios y alternativos en el territorio a partir del acuerdo de paz. 2) Alcance de la información generada en los medios de comunicación comunitarios y alternativos. 3) Libertad de expresión.

Según la fundación para la libertad de prensa-FLIP- el 38% de la población del Cauca no cuenta con medios de comunicación comunitarios (MAC) ya sea porque los existentes no cubren la totalidad del municipio o porque no cuentan con informativos locales. Por lo que la FLIP considera que 24 de los 42 municipios del Cauca son municipios en silencio.

En el municipio de Piendamó existe desde 1998 un canal comunitario: Tv Piendamó, donde la suscripción tiene un costo de \$18.000, teniendo en cuenta las precarias condiciones socioeconómicas de la población del municipio, este valor representa una barrera al acceso a la información. Igualmente desde 1996 existe una radio comunitaria llamada Piendamó la cual no cuenta con informativos locales. Por lo que ninguno de los dos podría denominarse como medios de comunicación alternativos y comunitarios.

En el municipio de Caldono existe desde el 2005 la emisora Uswal Nasa Yawe la cual cubre todo el territorio y cuenta con un informativo local, esto muestra un mejor panorama, ya que este medio de comunicación permite fortalecer y promover nuevos actores comunitarios.



En el municipio de Santander de Quilichao existen ocho MAC, lo que posiciona al municipio como el único en tener suficiente información local: Entre los medios más destacados está la radio Payumat que transmite desde el año 2005.

Como lo deja ver la información recopilada la firma del acuerdo no ha generado mejoras significativas en los medios de comunicación, tampoco se ha registrado la creación de nuevos medios y la única convocatoria vigente para adjudicar licencias no establece con claridad los territorios y las disposiciones que en ella se estipulan reproducen escenarios de exclusión.

Para determinar el alcance de los medios de comunicación comunitarios y alternativos se tuvo en cuenta sólo los municipios de Caldon y Santander de Quilichao ya que los medios de comunicación de Piendamó como se dijo anteriormente no cumple con las disposiciones para ser comunitario y alternativo.

La emisora Uswal Nasa Yuwe del municipio de Caldon cubre la totalidad del territorio y su contenido tiene en cuenta los problemas de la comunidad indígena y afro, al igual que la radio Payumat del municipio de Santander de Quilichao que cubre la totalidad del territorio.

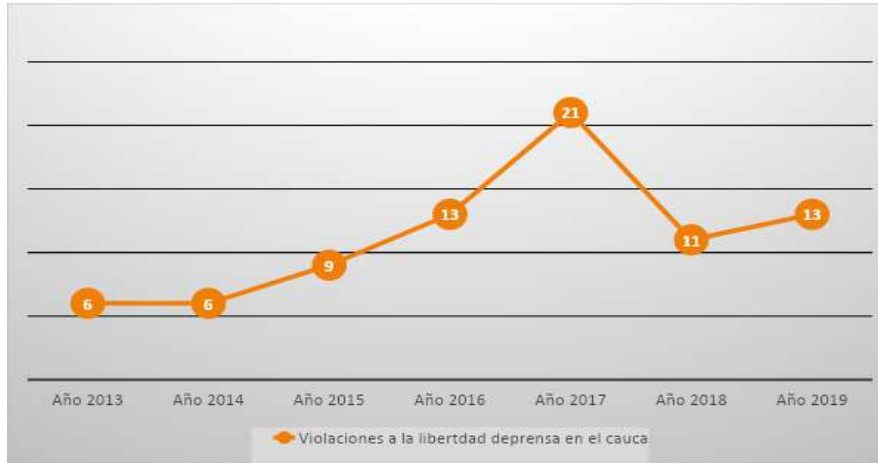
A pesar de que en el acuerdo de paz el gobierno se compromete a capacitar técnicamente a los MAC, estos no evidencian una mejoría en nuevas plataformas de divulgación como lo son las redes sociales y las páginas web que permitan un posicionamiento en lo local y visibilización a escala regional y nacional. Igualmente los medios existentes presentan la necesidad de una mejor infraestructura para la comunicación y alcance en todo el departamento, por ejemplo, en cuanto al acceso a internet solo existen 60.469 inscripciones a una red de internet, de una población total de 1.426.938 habitantes.

En cuanto a la libertad de prensa se tuvo en cuenta los ataques y/o amenazas de los que son víctimas quienes participan en medios de comunicación comunitarios y alternativos.

Según el informe de la FLIP y como se puede constatar en la siguiente gráfica, hubo un incremento en los ataques a personas miembros de medios de comunicación comunitarios y alternativos después de firmado el acuerdo de paz. En lo transcurrido del año 2019 se han denunciado 13 ataques a la prensa, que van desde amenazas a detenciones ilegales, se han registrado 17 víctimas. Del año 2013 al 2019 los ataques



han dejado un total de 125 víctimas. Esto evidencia una ruptura entre las disposiciones del acuerdo de paz y la realidad de los territorios.



Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la Federación para la libertad de prensa.

En el caso concreto de los municipios de Caldono, y Santander de Quilichao, los dos medios de comunicación comunitarios que allí operan, le aseguraron a la FLIP haber sido víctimas de amenazas y ataques a su labor periodística. En enero de este año, el diario el Tiempo (2019) registró una noticia en la que el coordinador de la emisora comunitaria radio payumat denunció la destrucción de los conductos y las antenas de las torres de transmisión de la emisora por parte de manos criminales no identificadas. Todo esto permite concluir que en materia de comunicación comunitaria y popular todo está por hacerse por parte del Estado, es necesario generar políticas públicas que apunten a tres ejes fundamentales: 1) Garantizar la apertura de nuevos medios comunitarios a partir de una reglamentación que garantice una participación masiva de las comunidades de los territorios en conflicto; 2) Capacitar a los medios de comunicación comunitarios para que irruman en las nuevas plataformas de la comunicación y su mensaje sea escuchado por un público mucho más amplio; 3) Garantizar el libre ejercicio de la expresión de opinión, sin que ello represente ser objeto de amenazas y ataques, elemento fundamental de cualquier democracia.

Conclusiones

En Colombia las limitaciones y concentración de la participación política institucional, el conflicto armado y el uso de la fuerza estatal y paraestatal en contra de la población civil, llevaron a la sociedad a organizar espacios de acción y expresión para autogestionar sus intereses y demandas, sin dejar de exigir al Estado responsabilidad frente a las mismas. El acuerdo de paz para la terminación del conflicto armado firmado



en el 2016 en su punto dos reconoce tanto estos problemas estructurales de la participación política institucional como el valor de las organizaciones de base para el robustecimiento de la democracia.

Para la población del Cauca territorio en donde coexisten actores armados legales e ilegales, cultivos ilícitos, concentración de tierras, conflictos interétnicos, problemas socioeconómicos será vital el fortalecimiento, alcance y seguridad de los movimientos y organizaciones sociales que disputan el sentido, la distribución de la tierra y la riqueza y gestionan proyectos alternativos para reconectar sus comunidades con el resto del territorio.

La sociedad Caucana y las comunidades de Piendamó, Caldono y Santander de Quilichao comprenden esta realidad y con valentía han adelantado diferentes procesos organizativos (Zonas de reserva campesina, asociaciones comunitarias, cabildos indígenas, mingas) para transformarla. Dentro de estos y según el análisis realizado, se destacan los movimientos indígenas ya que cuentan con emisoras comunitarias, organizaciones sociales y son un actor fundamental en las manifestaciones y protestas, resistiendo ante las fuerzas políticas, económicas y criminales que restringen los derechos e intereses de estas comunidades.

La apuesta del acuerdo de paz por pactar unas condiciones de participación ciudadana que garanticen a las comunidades empoderarse alrededor de las decisiones que se toman en sus territorios propone un escenario mucho más alentador para estas voces populares. Sin embargo, la violencia, la estigmatización, la falta de voluntad política y la incapacidad administrativa del Estado para cumplir los compromisos del acuerdo siguen poniendo a las comunidades del Cauca y a sus organizaciones políticas en un escenario de vulnerabilidad, en donde organizarse, manifestarse y comunicarse les puede costar la vida.

Bibliografía

Arias Cardona, A., & Alvarado, S. (2014). Jóvenes y política: de la participación formal a la movilización informal. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 581-594.

Alcaldía municipal de Caldono (2015). Plan de desarrollo construcción social con respeto y equidad 2016-2019. Obtenido de alcaldía municipal de Caldono: <http://caldonocauca.online/images/documentos/Planes/pdm-caldono-16-19-final-1.pdf>



- Alcaldía municipal de Piendamó-Tunía (2015). Plan de desarrollo el cambio es posible 2016-2019. Obtenido de Issuu: https://issuu.com/jhon_mera/docs/pmd_piendamo_paginas
- Alcaldía municipal de Santander de Quilichao (2018). Informe de gestión plan de desarrollo 2016-2019: Santander de Quilichao compromiso de todos. Obtenido de alcaldía de Santander de Quilichao: <https://bit.ly/3bd9Hra>
- Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca. (12 de Julio de 2016). *ACIN – ÇXHAB WALA KIWE: NUESTRA HISTORIA*. Obtenido de ACIN: <https://bit.ly/2Lvch0F>
- Asociación de Consejos comunitarios del Norte del Cauca. (20 de Febrero de 2019). ¿Quiénes somos?. Obtenido de Aconckekelo: <http://www.aconckekelo.org/quienes-somos/>
- Benjamin, W. (2013). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Bogotá: Desde abajo.
- Bonilla Vélez, J. I., & Tamayo Gómez, C. A. (2006). Medios de comunicación y violencias en América Latina: preocupaciones, rutas y sentidos. *Controversia*, 137-171.
- Consejo Departamental de Paz; Gobernación del Cauca; Espacio Regional de Paz. (2015). *Reflexiones caucanas ante los diálogos de la Habana: Análisis cartográfico frente a los posacuerdos de paz (Reintegración, Riesgos de Violencia y Paz desde El Territorio)*. Popayán: Gobernación del Cauca.
- CINEP. (2019). *Sexto informe trimestral de verificación de la implementación del Acuerdo final de paz en Colombia*. Bogotá: CINEP; CERAC.
- Consejo regional indígena del Cauca. (2 de Noviembre de 2017). Policía dispara a indígena en la minga. Obtenido de CRIC: <https://www.cric-colombia.org/portal/mingacric-policia-dispara-indigenas-la-minga/>
- Duque, D. (2015). *Capacidades locales para la paz: Recursos y retos para el postconflicto en la región Cauca*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- El Espectador. (30 de Octubre de 2017). Más de 100.000 indígenas inician minga nacional. Obtenido de El Espectador: <https://www.elespectador.com/noticias/paz/mas-de-100000-indigenas-inician-minga-nacional-articulo-720581>
- El Tiempo. (10 de Enero de 2019). Cabildos denuncian saboteo a emisora indígena del Cauca. Obtenido de ElTiempo: <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/emisora-indigena-del-cauca-por-fuera-del-aire-por-saboteo-312946>
- El Tiempo. (11 de Marzo de 2019). Indígenas se movilizan en minga en el norte del Cauca. Obtenido de El Tiempo: <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/indigenas-se-movilizan-en-minga-en-el-norte-del-cauca-335974>



- FLIP. (2 de Mayo de 2019). *Cartografías de la información*. Obtenido de FLIP: Centro de estudios:<https://flip.org.co/index.php/es/publicaciones/informes/item/2335-cartografias-de-la-informacion-un-viaje-por-las-grietas-del-periodismo-colombiano>
- Mesa de conversaciones. (2017). *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*. Bogotá: Oficina del Alto comisionado para la paz.
- NIMD. (2019). *Profundizar la democracia para consolidar la paz: avances en la implementación del punto dos del Acuerdo para la paz, relativo a la participación política*. Bogotá: Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria – NIMD.
- Organización Nacional Indígena de Colombia. (2 de Noviembre de 2017). En su cuarto día la minga por la vida se consolida a nivel nacional. Obtenido de ONIC: <https://www.onic.org.co/minga/2151-en-su-cuarto-dia-la-minga-por-la-vida-se-consolida-a-nivel-nacional>
- Personería de Medellín. (2010). Protesta social: entre el derecho y el delito. *Kavilando*, 133-144.
- Radio Súper Popayán. (9 de Febrero de 2019). Indígenas del Cauca llaman a la movilización nacional por el río Cauca. Obtenido de Radio Súper: <http://www.radiosuperpopayan.com/2019/02/09/indigenas-del-cauca-llaman-a-la-movilizacion-nacional-por-el-rio-cauca/>
- Rauber, I. (2016). Hegemonía, poder popular y sentido común. *Ágora*, 29-62.
- REDDHFIC. (2013-2019). Informes especiales. Obtenido de reddhfic: https://www.reddhfic.org/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=111
- Rojas, E. (2015). El movimiento campesino en el Cauca: organización y lucha territorial por el reconocimiento como sujeto de derechos. *Controversia*, 99-124.
- Rosanvallon, P. (2007). Desconfianza y Democracia (Introducción). En P. Rosanvallon, *La Contrademocracia: la política en la era de la desconfianza* (págs. 19-42). Buenos Aires: Manantial.



Trajectoria do movimento negro unificado em goiás: Os dilemas e as ações mobilizadoras contra o racismo.¹

Gabrielle Andrade da Silva²

Resumen

A presente pesquisa tem como finalidade trazer para o cenário acadêmico a trajetória do MNU-GO. O percurso trilhado pelo MNU-GO na luta contra o racismo será recuperado, por meio da análise de entrevistas feitas com alguns dos militantes, os quais atuaram e ainda atuam nessa ramificação do movimento negro, como também, através da avaliação crítica dos documentos aos quais eu tive acesso. Essa investigação terá como escopo revelar as formas de atuação, os dilemas e as principais conquistas do MNU-GO, sobretudo na segunda metade dos anos 1980 até o final dos anos 1990, período que ocorreram as atuações de maior destaque. Ainda que, nos dias atuais não tenham sido realizadas ações de maior notoriedade, é importante o estudo do MNU-GO porque essa foi a primeira ramificação do movimento negro nacional a promover cursos de formação para população negra em Goiás, bem como a trazer o debate sobre o racismo neste estado para mídias locais de grande circulação. Por fim, ainda que se registre na história de Goiás vários acontecimentos que remetam a resistência negra nesse estado, compreende-se aqui que a fundação do MNU-GO inaugura a atuação do movimento negro urbano em em Goiás, sendo o primeiro a trazer para a academia.

Palavras chave

MNU; Goiás; Mobilizações, Dilemas.

Palabras llave

MNU; Goiás Movilizaciones, Dilemas.

Keywords

MNU; Goiás; Mobilizations, Dilemmas.

Introdução

O presente artigo tem como objeto o estudo acerca do movimento negro. Contudo, o movimento negro é muito extenso com diversas ramificações³ e objetivos que podem



ser variantes. Logo, o que se propõe é estudar o Movimento Negro Unificado (MNU) em Goiás, em específico suas ações mobilizadoras e seus dilemas.

Assim, o problema que a pesquisa é sobre as mobilizações e os dilemas do MNU, durante o período da redemocratização do Brasil até o início do século XXI. Para atender a esse problema, a abordagem utilizada foi a qualitativa, que é indicada para pesquisa de movimentos sociais, pois, as estratégias de investigação e os métodos são fundados na coleta e análise de dados qualitativos – via textos e imagens.

Para tanto, foram realizadas entrevistas, com a aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Assim, o trabalho de campo foi responsável por coletar as informações inéditas sobre o MNU. O tratamento dos dados das entrevistas e dos documentos, foi a análise de discurso. Segundo Gill (2015) o analista de discurso deve se atentar a forma como a linguagem é empregada e ser sensível a aquilo que não foi dito. Para tanto, deve-se ser cuidadoso com as tendências e o contexto social, político, cultural do entrevistado.

Movimento negro unificado

No período pós-64 a juventude de um modo geral se organizou em movimentos sociais a fim de buscar transformações nas instituições sociais daquele período. Embora esses jovens tenham se engajado inicialmente em busca de liberdade democrática, outras pautas surgiam naturalmente, como a busca por equidade de direitos para mulheres, negros e homossexuais (Santos, 2009).

De acordo com Soares (2012) existe uma versão do surgimento do MUCDR que liga essa ramificação do movimento negro com a esquerda da época. Isso porque teria sido fruto de um projeto gestado dentro da Liga Operária, atual Convergência socialista. Essa tese é defendida por Gevanilda Santos. Assim, conforme Santos (2009), Hamilton Cardoso, militante do MUCDR, afirma que foi idealizado pelo Núcleo Socialista. Cabe salientar que o Núcleo Socialista foi criado por universitários de São Paulo, Campinas e São Carlos e tinha como objetivo aglutinar todos os grupos sociais vítimas de discriminação (negros, índios e mulheres), e isso explica o primeiro nome do MNU. Além dos motivos elencados acima necessidade de unificar a luta dos negros brasileiros, e então, em 18 de junho de 1978, três mil pessoas nas escadarias do teatro municipal com apoio de pelo menos cinco estados se deu o primeiro ato do MNUCDR. Ademais, os militantes do MUCDR publicaram também uma carta aberta contra o racismo no Brasil:



“Hoje estamos nas ruas numa campanha de denúncia!” Campanha contra a discriminação racial, contra a opressão policial, contra o desemprego, o subemprego e a marginalização. Estamos nas ruas para denunciar as péssimas condições de vida da Comunidade Negra. Hoje é um dia histórico. Um novo dia começa a surgir para o negro! Estamos saindo das salas de reuniões, das salas de conferência e estamos indo para as ruas. Um novo passo para o racismo. (MNU, 1988)

Dentre os cinco estados que apoiaram o ato em São Paulo estavam: Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas, além dos negros presidiários da Casa de Detenção de São Paulo. Nesse primeiro momento nenhum estado ou grande centro urbano da região centro-oeste teve participação, o que não diminui sua importância quando foi criada uma seção em Brasília e depois em Goiânia.

No Rio de Janeiro, algumas entidades lançaram uma convocação para o ato de protesto público:

As entidades Jornal Afro-Latino-América, Grupo de Artistas Negros, Associação Brasil Jovem, Grupo de Atletas Negros, Jornal “Abertura” e “Afro-latino-américa”, do Rio de Janeiro, lançaram uma carta convocatória para o ato público de protesto. O seu texto era muito claro: “Não podemos mais nos calar. A discriminação racial é um fato na sociedade brasileira, que barra o desenvolvimento do negro, destrói a sua alma e a sua capacidade de realização como ser humano” (Moura, p.171, 1982).

Esse primeiro período do MUCDR segundo Hamilton Cardoso teve vitórias no combate ao racismo dentro da esquerda. Embora haja alguns fracassos na implementação de uma política antirracista, por exemplo, o Núcleo Negro Socialista não conseguiu definir um repertório de atuação contra o racismo, o que enfraquece seu alcance e conseqüentemente sua existência.

Nesse sentido, fica claro que é preciso estabelecer direção para o MUCDR a fim de estabelecer repertórios para intensificar a luta antirracista. Segundo Santos (2016) foram Abdias Nascimento e Lélia Gonzalez que sugeriram a inclusão da palavra negro no nome, e assim direcioná-lo para a luta contra o racismo.

A substituição do termo “Contra a Discriminação Racial” por “Negro”, estabeleceria a identidade do movimento. E essa mudança ratificaria a importância de debater as questões raciais junto a grupos de esquerdas, que tinham setores que acreditavam ser prejudicial essa segmentação da luta dos oprimidos (Santos, 2016).



Figura 1. Criação do Movimento Negro Unificado
Fonte: Blog do MNU.

Por fim, foto acima é do dia da fundação do MNU, e ao analisar alguns dos cartazes que aparecem é possível compreender alguns dos objetivos dessa ramificação do movimento negro. Existe já em primeiro plano um cartaz que prede a democracia racial, ou seja, afirma que não existe como a ideia hegemônica pregou durante décadas sobre relações raciais no Brasil.

Ações mobilizadoras do mnu

O MNU por natureza da sua constituição é nacional e unificado, mesmo que trate das divergências regionais, existia um modelo de estatuto e programa de ações para todas as seções do MNU. Por isso, para apresentar o tema das ações mobilizadoras do MNU-GO é imprescindível abordar alguns pontos do estatuto e do programa de ações.

As diretrizes eram dadas pelo Programa de Ação. No acervo pessoal do sujeito de pesquisa, entrevistado 6, constava o programa aprovado no IX Congresso Nacional do MNU, que elenca as prioridades de luta para as seções:

- 1 – Por um movimento negro independente.
- 2 – Pelo fim da violência policial e contra a “indústria” da criminalidade. 3 – Pelo fim da discriminação racial no trabalho.
- 4 – Por uma educação voltada para interesses do povo negro e de todos os oprimidos.
- 5 – Pelo fim da manipulação política da cultura negra.
- 6 – Contra a exploração sexual, social e econômica da mulher negra.
- 7 7 – Pelo fim da violência racial nos meios de comunicação.



8 8 – Pela solidariedade internacional da luta de todos os oprimidos. (Movimento Negro Unificado, p.3, 1990).

Assim, o MNU definiu as prioridades determinadas pelo programa de ação. Além de elencar das pautas prioritárias, o programa explana sobre cada um dos itens e o as justifica, o que o torna também um manifesto com esclarecimentos acerca dos problemas enfrentados pela população negra brasileira. No que tange o Estatuto do MNU (1986)⁵ no artigo 4º, se definia como um: “movimento reivindicativo e autônomo, sem distinção de raça, sexo, instrução credo religioso ou político”.

Já nos artigos 5º e 6º estavam elucidadas as finalidades do movimento que era combater o racismo em qualquer circunstância ou local, lutar contra a discriminação racial e promover intercambio com movimentos negros de outros países. Essas determinações trazem de maneira ampla a direção que o MNU-GO deveria seguir para organizar suas mobilizações.

Sobre a coordenação estadual, o artigo 22 do Estatuto do MNU (1986) aponta suas atribuições, por exemplo, participar do Congresso Nacional do MNU e colocar em prática as políticas ali estabelecidas, organizar pelo menos duas vezes por ano Assembleias estaduais em conformidade com as necessidades locais.

Diante das diferenças regionais, do perfil dos militantes goianos e com as orientações da coordenação nacional, o MNU-GO passa a organizar atividades diversas principalmente da capital do estado⁶. Por meio do perfil de boa parte dos militantes do MNU-GO, pode-se intuir sobre os repertórios da luta contra o racismo nesse estado.

Finalmente, após explanar sobre as diretrizes do MNU nacional, destaca-se que as quatro ações principais desse Movimento Negro Unificado de Goiás são: atuação junto à ocupação Emílio Póvoa, cursos de formação, atividades culturais, mobilizações em quilombos.

Dilemas do mnu goiás

Diante do contexto do racismo em Goiás, existiam dilemas a serem solucionados pelo MNU-GO. A entrevistada 7 destaca alguns pontos interessantes acerca da integração do movimento com espaços educacionais. Segundo ela, houve sim um interesse em promover palestras em datas comemorativas, mas destaca que não houve uma parceria, ou seja, não aconteceu uma integração com o projeto de construção de uma sociedade livre do racismo e da discriminação racial, como propõe o MNU.



A entrevistada 7 afirma ainda que os setores mais progressistas da sociedade, sejam movimentos sociais ou partidos políticos, sempre se sentiram coagidos a abordar a pauta do negro, mas jamais colocaram esse assunto como pauta prioritária de suas agendas. Era uma discussão feita apenas pelos membros negros para outros negros e não extrapolava essa barreira.

Segundo o entrevistado 6 (2018), para levar o debate sobre racismo além do mundo acadêmico foi fundamental a atuação do MNU em locais como o Emílio Póvoa. Ademais, ele destaca que a organização por meio de Grupos de Trabalho (GTs) tornava possível o movimento estar presente em diversas regiões da cidade e ainda que tenham surgido dificuldades para manter os GTs, essa estrutura foi essencial para a difusão do debate sobre questões raciais nos demais setores da sociedade.

Diante da fala dos dois entrevistados, é perceptível que havia uma dificuldade em inserir o debate sobre questões raciais em espaços fora da academia. Ainda que o entrevistado 6 tenha destacado as tentativas realizadas pelo MNU-GO a fim de difundir o debate sobre racismo e discriminação racial, ele mesmo afirma que havia uma resistência para receber e dar centralidade a essas discussões em outros meios.

O entrevistado 3 (2017), por exemplo, afirmou que tinha uma participação ativa no PCB, mas quando tentou inserir o tema racismo nas reuniões notou que o partido não estava aberto para esse debate, considerando-o como secundário. Já a entrevistada 2 (2017) conta que sua participação em movimentos sociais se deu inicialmente no movimento secundarista, onde também não conseguiu espaço para aprofundar nas discussões sobre relações raciais. Ainda que fazendo parte de um grupo reduzido, houve alguns conflitos relacionados a posições políticas entre os membros. A entrevistada 7 (2007) suaviza a existência desses conflitos políticos e diz que ainda que se tratasse de um movimento unificado havia respeito as diversidades, pois, entende que não há problemas com a existência de divergências políticas, desde que o movimento permaneça coeso e unificado. Mas, essa não é uma posição unânime entre os entrevistados.

Considerações finais

A princípio é importante esclarecer que os dados coletados em campo são insuficientes para obter reflexões mais profundas sobre a atuação do MNU-GO. Isso porque, a pesquisa documental foi toda feita com base no acervo pessoal dos entrevistados 6 e 7.



No entanto, a presente pesquisa pôde despertar o interesse em alguns militantes em organizar os documentos do MNU-GO. E pelo fato da dissertação de mestrado ter que ser realizada no prazo de 24 meses, os documentos, fotos, vídeos, gravações, caso venham a ser organizados, poderão enriquecer outras pesquisas que surgirão.

Ainda que tenha algumas informações ausentes nessa pesquisa, houve a realização de sete entrevistas e a coleta de diversos documentos. Nesse sentido, existe a possibilidade de conhecer a trajetória do MNU-GO, mesmo que não compreenda a totalidade de suas ações mobilizadoras, conquistas e dilemas, é possível estabelecer reflexões, diante das informações colhidas no trabalho de campo.

Vale salientar que os jovens integrantes do MNU-GO conseguiram realizar diversas atividades para formar seus membros e levar as discussões sobre questões raciais para a universidade e fora dela, por meio dos atos realizados em espaços externos ao meio acadêmico. Todavia, os dilemas permaneciam e surgiram cada vez mais dificuldades, e por outro lado as demandas da população negra não paravam de crescer e incomodar aqueles que se dispuseram a lutar contra a opressão em Goiás.

Nesse sentido, os conflitos oriundos de divergências políticas, que acarretaram na saída de alguns dos membros do MNU-GO, existiram e foi um dos elementos que enfraqueceram e desgastaram a estrutura desse movimento. Já que se tratava de um grupo pequeno, sem recursos financeiros e não contavam apoio efetivo das demais camadas da sociedade.

Além disso, o papel do MNU-GO foi de suma importância para denunciar a situação dos moradores da ocupação Emílio Póvoa e dos quilombos em Goiás. Sendo que a discussão sobre os quilombolas foi colocada inicialmente no nosso estado e depois inserida no restante do país, por meio das discussões sobre as agendas das seções.

Por fim, concluo reiterando que essa pesquisa não é definitiva e não pode ser considerada como acabada, mas sim, como um estudo a ser continuado. A necessidade de se organizar em movimentos sociais é urgente, ao contrapasso que a escassez de registros sobre a atuação desses movimentos pode fazer com que suas pautas, lutas e conquistas caiam no esquecimento – e esse não é um lugar aceitável para aqueles que lutam pelo fim das desigualdades.

Notas

¹ O presente artigo representa parte da pesquisa realizada no mestrado de Gabrielle Andrade da Silva, cuja orientação foi realizada pelo Cleito Pereira dos Santos.



² Mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

³ Para Viana (2015) os movimentos sociais têm ramificações, ou seja, o MNU não é movimento negro em sua totalidade, mas sim uma parte do todo.

Referências Bibliográficas

Gill, Rosalind. Análise de discurso. In: Bauer, Martin W.; Gaskel, George (Orgs). *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

Santos, Gevanilda. *Relações raciais e desigualdade no Brasil*. São Paulo: Selo Negro, 2009.

Santos, Marcio Henrique Casimiro Lopes Silva. *Luta por reconhecimento ou luta por redistribuição? O MNU e os dilemas do antirracismo no Brasil contemporâneo*. Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 2016.

Movimento Negro Unificado. *1978 – 1988 10 anos de luta contra o racismo*. São Paulo: Confraria do Livro.

Moura, Clóvis. *Organizações Negras*. In: Singer, Paul; Brant, Vinicius Caldeira. São Paulo: O povo em movimento. Petrópolis: Editora vozes, 1982.

Viana, N. *Movimentos Sociais*. Florianópolis – SC: Bookess, 2015.



Eleição da Bancada Ativista em São Paulo, Brasil: Mandato coletivo como proposta de representação política contemporânea.

Priscila Dayne Galvão Silva¹
Cynthia Harumy Watanabe Correa²

Resumo

Este estudo busca apresentar hipóteses sobre a candidatura e a eleição da Bancada Ativista para a câmara de deputados do Estado de São Paulo, Brasil, em 2018. Trata-se de uma candidatura coletiva, na qual um grupo de 9 pessoas se propôs a dividir uma vaga de deputada estadual, partilhando direitos e deveres de forma igualitária, utilizando-se da autocomunicação nas redes sociais e da inteligência coletiva para a resolução de problemas, num formato horizontal de governança, com transparência radical e tomada de decisão por deliberação, bem como a publicação de relatórios online e promoção de eventos para a prestação de contas. O grupo foi eleito como a décima candidatura mais votada no Estado e conseguiu mobilizar o maior financiamento coletivo online (*crowdfunding*) para fins eleitorais no país. A partir das ideias de Jenkins (2009), Levy (2010), Shirky (2012) e Castells (2017, 2018) sobre cultura digital, formação de grupos online e a crise da democracia representativa, além da análise documental de sites, redes sociais e jornais, foram apontadas algumas ideias sobre como a cultura digital tem impactado a política brasileira na atualidade.

Palavras chave

Cultura digital; Política; Candidatura coletiva; São Paulo; Brasil.

Introdução

Há muito se fala sobre as profundas mudanças sociais, culturais e tecnológicas que a modernidade causou. Hoje, mais do que nunca, experimenta-se as consequências dessa revolução (Giddens, 1991). O aceleração propiciado pela técnica em uma sociedade interconectada em rede (Castells, 2017), aliado ao discurso contemporâneo da busca pelo desempenho pessoal (Han, 2018), estimula o intercâmbio cultural e cobra o preço dos indivíduos cada vez mais interconectados, fragmentados em identificações múltiplas e complexas em um contexto globalizado (Hall, 2007). Eles precisam se adaptar vertiginosamente a uma enxurrada de informações e a mudanças velozes impostas, não mais pelo viés do tempo linear da natureza humana, mas por meio do tempo e do desenvolvimento exponencial das máquinas (Harari, 2018).



Assim, nascem novas formas de interações e organizações sociais que vêm pressionando e desestabilizando as instituições modernas tradicionais profundamente, por razão das intensas interações sócio-tecno-comunicacionais. Com a rede digital, antigos problemas coletivos ganharam novas agilidades, formas de resolução e organização impactando diversos campos sociais como a educação, a economia, a saúde, segurança, política, entre outros. Na política especialmente vislumbrou-se a formação de movimentos sociais autoorganizados (Castells, 2017), oriundos de grupos na plataforma de rede social Facebook, que ganharam as ruas em várias partes do mundo. Outro fenômeno político recente foi o surgimento do que Gerbaudo (2019) chama de partidos digitais em várias partes da Europa, que vêm se organizando virtualmente por meio da participação coletiva, em plataformas online.

Com novas ferramentas técnico-comunicativas, a facilidade em mobilizar pessoas, recursos, reunir, transmitir e armazenar informações, criando ambientes para discussão, deliberação e votação, ganharam novas proporções, assim como a utilização do que Levy (2010) e Jenkins (2009) chamam de inteligência coletiva, que interconectou habilidades para a resolução de problemas ou para a criação de produtos, projetos, comunidades ou coletivos. De forma similar, emergem novos problemas como a questão da geração, controle e uso de dados pessoais por governos e mercados, bem como a distribuição massiva de informações falsas (Jenkins, 2009, Levy 2010, Shirky, 2012, Castells, 2017, Morozov, 2018).

Diante desse quadro, em 2018, no Estado de São Paulo, Brasil, foi eleita para a vaga de deputada estadual um projeto de mandata¹ coletiva/compartilhada intitulada de "Bancada Ativista". A mandata é composta por nove ativistas, sendo sete do sexo feminino e de áreas diferentes, que assumiram o compromisso em compartilhar uma vaga na assembleia legislativa e dividir o poder de forma equitativa, decidindo e fazendo propostas em conjunto por meio da deliberação (Monica da Bancada, 2018).

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de São Paulo (2018), a candidatura conquistou 149.844 votos, sendo a décima mais votada no Estado, além de ter mobilizado o maior financiamento coletivo via plataforma online (*crowdfunding*) para fins eleitorais no país (Voto Legal, 2018). Apesar da iniciativa, o compartilhamento do cargo não é previsto pela lei brasileira, logo, o grupo se candidatou por meio da representação de Monica Sanches (Monica da Bancada, 2018).

Partindo de uma perspectiva técnico-sócio-comunicacional, este trabalho busca apontar algumas ideias sobre como a cultura digital tem impactado a política brasileira na



atualidade, especialmente no que tange à formação de grupo e a novas formas de organização coletiva, que vêm priorizando um sistema mais horizontal de coordenação, utilizando-se da inteligência coletiva e da autocomunicação nas redes digitais. A questão da crise da democracia representativa ainda é levantada como um fator que parece influenciar a busca por novas formas de representação, o que poderia ter culminando na eleição da mandata coletiva. Não é possível abranger todo o fenômeno dada sua emergência, mas com base nas observações teóricas de Jenkins (2009), Levy (2010), Shirky (2012) e Castells (2017, 2018) associadas à análise documental de matérias de jornais, redes sociais e sites, buscou-se apresentar hipóteses sobre o que a eleição de uma candidatura coletiva pode revelar sobre a força da cultura digital impactando a política brasileira na atualidade.

Novos Espaços, Novos Coletivos

A democratização tecnológica possibilitou a interconexão social em redes globais criando novos espaços de diálogos e compartilhamentos virtuais complexos. A comunicação e a informação, antes massivas e centralizadas nas mãos de poucos e grandes emissores para um público consumidor passivo, agora também passam a nascer do sujeito independente que, ao ter acesso e dominar a técnica, produz, distribui e colabora com a construção de conteúdos, circulando informações de forma não linear pela rede (Jenkins, 2009, Levy, 2010, Shirky, 2012, Castells, 2017).

Castells (2017) chama esse movimento de autocomunicação, assim, a comunicação digital continuou sendo de massa porque empreende "(...) mensagens de muitos para muitos, com o potencial de alcançar uma multiplicidade de receptores e de se conectar a um número infindável de redes que transmitem informações digitalizadas pela vizinhança ou pelo mundo" (p.21). No entanto, é autocomunicação porque a informação/mensagem agora pode ser formulada pelo sujeito autônomo que escolhe para quem quer enviar (autodireccionamento) e também consegue resgatar/deletar/compartilhar a mensagem quando quiser (autoseleção).

Esse sujeito, que se autocomunica, cria redes/grupos de troca de informações na rede global, que não dependem necessariamente de veículos/instituições tradicionais para se encontrar e se organizar em prol de um projeto (Castells, 2017), por essa razão a internet se tornou mais do que um recurso meramente técnico. A rede passou a ser algo que tem impacto na expectativa que as pessoas têm em relação a tudo o que acontece, seja a questão da educação, economia, cultura, sustentabilidade, consumo, política, segurança, pois todas as áreas sofreram algum tipo de impacto por conta da agilidade



técno-comunicacional. Esse efeito radical estaria impelindo os sujeitos a mudanças e os obrigando a pensar novos modelos de vida ao assimilarem que problemas antigos precisam de novas soluções. Shirky (2012) afirma que na atualidade se tem encontrado uma "(...) nova eficácia para velhos comportamentos" (p.18).

É importante lembrar que Levy (2010) define o ambiente digital como fluido e em constante mutação, o que lhe confere como característica essencial a instabilidade. Pensa-se, assim, a todo momento, em novas tecnologias, aplicativos, formas de interação ou utilização da web que são criadas ao redor do globo. Além disso, aqueles que criam tais tecnologias não conseguem abarcar todo o imenso e complexo desenvolvimento que se desenrola em torno da rede. Isso acaba gerando uma cultura que tem como fundamento a instabilidade, pois é transformada a cada momento pelas novas possibilidades tecnológicas e interativas. Diante disso, ninguém é capaz de participar de todas as mudanças e criações que acontecem constantemente, em diferentes lugares e ao mesmo tempo (Levy, 2010).

As chamadas novas tecnologias seriam a materialização das complexas e multiformes atividades coletivas humanas, materializando e trazendo agilidade (aceleramento) à complexidade por meio de dispositivos de comunicação, programas, aplicativos, interfaces e redes sociais. A questão é que esse processo apresenta uma opacidade social em que há dificuldade para se formular/assimilar todos os processos por conta da velocidade em que acontecem, causando estranheza e distanciamento nos indivíduos (Levy, 2010).

A forma encontrada pelos sujeitos para intervirem nesse processo de opacidade, e sentirem-se mais integrados com a rede e entre si, foi a utilização do que Levy (2010) chama de cultura da inteligência coletiva, que seriam "(...) modos de cooperação flexíveis e transversais", por meio de "uma sinergia entre competências, recursos e projetos" constituída e mantida mediante "dinâmicas de memórias em comum", tornando possível a "distribuição coordenada dos centros de decisão" (p.29). A inteligência coletiva teria encontrando no ciberespaço um ambiente potencializador e se transformou em um dos principais motores da cibercultura.

A questão é que o desenvolvimento dos processos de inteligência coletiva implica no questionamento de poderes, pois, quanto mais os indivíduos e grupos se apropriam/participam das alterações técnicas, mais aqueles efeitos de exclusão ou distinção causados pelo aceleramento são atenuados e novas formas de interação, agrupamento e colaboração em grupo surgem. Seja na formação online de um fã clube



de determinado jogo, série, filme ou até no ajuntamento de perfis em redes sociais com a finalidade de pressionar governantes por mudanças políticas e sociais. O fato é que pessoas com interesses em comum têm se reunido com facilidade na web (Jenkins, 2009, Levy, 2010, Shirky, 2012).

A reunião e colaboração entre indivíduos não é um comportamento social novo, mas a novidade veio na alteração do fluxo da distribuição de informações, a força com que ela acontece, o baixo custo, a retirada do limite de compartilhamento e a duração da reação dos indivíduos, a internet transpôs duas antigas barreiras importantes: a natureza local da informação e os obstáculos à reação coletiva, priorizando articulações mais horizontais. Essa circunstância começou a suplantar a agilidade de estruturas organizadas de forma mais verticalizada, pois, com o ganho na velocidade comunicacional, as redes digitais impulsionaram e trouxeram largas vantagens para organizações distribuídas horizontalmente (Jenkins, 2009, Shirky, 2012, Castells, 2017).

Com a autocomunicação (Castells, 2017) e o facilidade da transmissão de informações, seja a um grupo, a uma rede de grupos ou a apenas uma pessoa, a difusão e a amplificação de mensagens têm a capacidade de mudar a consciência coletiva, entretanto, isso seria restrito se não houvesse também uma mudança na ação grupal. Mais complexa que a produção coletiva, a ação grupal ganhou novas formas de atuação com as novas ferramentas, desafiando instituições tradicionais e "(...) erodindo o monopólio institucional da coordenação em grande escala" (Shirky, 2012, p.123)

Não se pode perder de vista as atuais discussões sobre mineração de dados, qualificação de usuários, manipulação algorítmica, venda de dados e fake news (Silveira, 2016, Machado, 2018, Morozov, 2018, D'Ancona, 2018). Sabe-se que a coleta de dados gerados pelos usuários se tornou central no modelo de negócios de plataformas digitais e são capazes de "(...) orientar, modificar e modular o comportamento (...)" (Machado, 2018, p.47), por isso ao se pensar nas formações de grupos virtuais não se pode ser ingênuo apostando apenas em movimentos meramente orgânicos e espontâneos, grupos intencionalmente qualificados também são formados, seja por interesses de mercados, instituições ou grupos políticos.

O Que Crise Democrática Tem a Ver Com Isso

Se de alguma forma a ação grupal ganhou novas ferramentas e espaço para a atuação, desafiando instituições tradicionais e desgastando o controle institucional de governança em grandes proporções, como sugere Shirky (2012), é relevante ampliar a



lupa e trazer para a discussão a atual crise do modelo democrático representativo, pois se trata de um modelo institucional de organização coletiva que parece estar perdendo a relevância diante de novas formas de organização e novas demandas por participação, ampliadas com a agilidade comunicativa entre os cidadãos e viabilizada pelo uso das redes sociais, o que poderia explicar o surgimento de candidaturas políticas coletivas.

Castells (2018) e D'Ancona (2018) afirmam que a progressiva distância entre interesses de governantes e governados, a incapacidade institucional de lidar com as múltiplas crises e transformações sociais, as crescentes denúncias de casos de corrupção e decisões tomadas com fundamento em interesses comerciais e econômicos, em detrimento dos interesses dos eleitores, desencadearam um tipo de colapso da confiança das sociedades democráticas ocidentais nos governos e nas instituições midiáticas tradicionais. O modelo de democracia representativa parece não representar tanto assim, teria desenvolvido uma nova forma de oligarquia que excluiu as pessoas comuns da vida pública, em que o sistema democrático tem funcionado independente delas e políticos se auto perpetuam representando os próprios interesses, o que, segundo Castells (2018), não se trata de escolher entre direita ou esquerda.

Conforme D'Ancona (2018), "(...) todas as sociedades bem-sucedidas dependem de um grau relativamente alto de honestidade para preservar a ordem, defender a lei, punir os poderosos e gerar prosperidade" (p.42). A confiança atua como um mecanismo primordial de manutenção das relações humanas e uma comunidade sem confiança está sempre na defensiva, esperando pelo próximo golpe. É diante desse cenário que os indivíduos têm feito tentativas de viabilizar novas formas de se unir e (re)existir na atualidade.

Ao favorecerem o encontro e o agrupamento das identidades contemporâneas (Hall, 2007) e de indignações coletivas (Castells, 2017), as redes digitais passaram a fomentar o caldeirão do debate e das mobilizações políticas e sociais. Os cidadãos encontraram na web o ambiente de fala que lhes faltavam nas instituições representativas e midiáticas tradicionais. As ferramentas de interação disponíveis proporcionaram um terreno particularmente fértil para a expressão, o engajamento político e a construção de ambientes por meio da ação colaborativa. Os sujeitos interconectados aproveitaram esse espaço de fala horizontal, para contornar o controle informativo e comunicacional das mídias tradicionais para debater, produzir e divulgar os próprios conteúdos (Castells, 2017). Diante desse quadro, "(...) a política se enuncia duplamente: no seu



centro, nas mídias e instituições representativas, e na periferia" representada pela "(...) abundante e múltipla rede de conversas dos cidadãos" (Cardon, 2016, p.291). É "(...) no cerne da sociedade em rede como nova estrutura social" (Castells, 2017, p. 190) que nascem os movimentos coletivos característicos do século XXI.

Muitas dessas indignações coletivas partilhadas se transformaram em mobilizações sociais digitais que, não vinculadas a organizações políticas, materializaram-se ocupando as ruas de seus países de forma espontânea e Outro movimento político decorrente da crise democrática é o que Gerbaudo (2019) chama de partidos digitais, na Europa. São partidos políticos que se intitulam independentes, nascidos da reunião e participação online de cidadãos em redes sociais que, ao não se sentirem representados pelas siglas e políticos tradicionais, têm escolhido os candidatos em votações online na busca de representantes fora do metiê tradicional. Os maiores expoentes seriam o Movimento Cinco Estrelas, na Itália, o Podemos, na Espanha, e os Partidos Piratas, nos países escandinavos. Eles se apresentam como uma tentativa de solução para os desequilíbrios da atual democracia representativa, sustentando discursos participacionistas por se considerarem mais abertos e sem intermediações. Além de defenderem valores como franqueza, transparência, capacidade de resposta, liberdade de escolha e mudança, mais conexão e formação de comunidade. Para isso, propõem modelos de organização políticas e mecanismos de participação democrática baseados em plataformas de colaboração online. Contudo, para Gerbaudo (2019):

(...) plataformas não são neutras e implicam novas hierarquias e relações de poder. De fato, a plataforma frequentemente aparece como uma espécie de armadilha usada pelos líderes do partido para inventar a impressão de uma liderança inexistente ou fraca e puramente facilitadora. A ideologia participacionista fornece uma justificativa ética e ideológica para essa mudança em direção à lógica da plataforma² (tradução nossa, p. 179).

Esses partidos estariam embasados na lógica algorítmica de captação e manipulação de dados como ocorre no Facebook, Amazon e Google.

Nove Ativistas e Uma Cadeira no Legislativo de São Paulo

Recentemente, nas eleições de 2018, no Brasil, uma candidatura peculiar ganhou espaço nas plataformas de redes sociais e holofotes da mídia. Trata-se de uma candidatura coletiva ou compartilhada, nomeada de Bancada Ativista e eleita para o cargo de deputada estadual em São Paulo. A bancada é formada por nove ativistas



sociais, de diversas identificações, que se propuseram a compartilhar de forma igualitária um único cargo no legislativo do Estado.

O movimento começou como um coletivo que envolveu ativistas da cidade de São Paulo que vinham buscando apoiar pré-candidaturas ao legislativo desde 2016, incentivando iniciativas e experimentos políticos. O intuito era oxigenar a prática política na câmara de vereadores da cidade por meio do aprendizado coletivo. Na época, o movimento apoiou a candidatura de outros nove ativistas de partidos diferentes, em campanhas autônomas e individuais, contribuindo com a eleição da vereadora Sâmia Bomfim³ (Mônica da Bancada, 2018).

Com foco na renovação do sistema eleitoral e sentindo a necessidade de propostas que os conectassem com as bases, em 2018, o movimento lançou a candidatura coletiva da Bancada Ativista pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), composta por nove cidadãos, alguns com filiações em outros partidos como a Rede Sustentabilidade (REDE) e outros sem inscrição partidária. O grupo é constituído por múltiplas identificações culturais, atuantes em causas sociais diversificadas e localizados em diferentes regiões do Estado. Segundo informações do site, as co-candidatas foram escolhidas de forma consensual num "(...) longo processo de diálogos com ativistas, movimentos e coletivos interessados em se candidatar ou indicar nomes" (Mônica da Bancada, 2018).

Existem escassos estudos sobre o tema, conforme o recorte da representação política legislativa apresentada neste trabalho devido à recente emergência do fenômeno, que surgiu com um caráter mais experimental do que teórico. Este tipo de representatividade, apesar da ausência de legislação prevista no país, não foi o único a se candidatar no último pleito. Um levantamento realizado pelo jornal Correio Brasiliense (2018), com base em informações do TSE (2018), mostrou a ocorrência da menção "coletivo(a)" na composição de nomenclaturas de nove candidatos. Contudo, o número pode ser ainda maior, pois, como não são oficiais enquanto coletivas, nem todas apresentam o termo mencionado, podendo fazer uso de qualquer outra terminologia para se identificar com os eleitores. Sabe-se, por exemplo, que essa nomenclatura não incluiu dois coletivos efetivamente eleitos para os cargos de deputados estaduais. O movimento Juntas, formado por cinco mulheres e que conquistou uma cadeira na câmara estadual de Pernambuco (Juntas Codeputadas, 2019), e a própria Bancada Ativista, que assinou a campanha com o nome da representante Mônica Seixas,



apresentando-se para os cidadãos como "Mônica da Bancada". Somadas, seriam pelo menos 11 iniciativas do tipo na eleição de 2018.

A escolha analítica da Bancada se deu pela relevante mobilização empreendida em torno da campanha. Conforme dados do TSE de São Paulo (2018), a candidatura conquistou 149.844 votos, sendo a décima mais votada no Estado de São Paulo. A nova formação política não só atraiu um expressivo número nas urnas, como também alcançou votos em 90% dos municípios do estado (TSE, 2018). Outro dado importante foi a obtenção do maior financiamento coletivo (*crowdfunding*) para fins eleitorais no país, considerando a disputa para deputado estadual, com a participação 768 pessoas que doaram 72.598 reais para a campanha (Voto Legal, 2018). Os números demonstram que houve grande empatia e aceitação por parte dos eleitores com este tipo particular de candidatura, e talvez apontem para uma tentativa de mudança na forma de se pensar a participação/representação política na atualidade.

As propostas de candidatura coletiva ou compartilhada, ao que parece, surgiram a partir da atual cultura tecno-comunicativa de formação de grupo tendo como base o uso da inteligência coletiva (Jenkins, 2009, Levy, 2010) para a resolução de problemas. O modelo da Bancada Ativista oferece uma proposta de participação comunitária na qual o cargo é exercido por um grupo de cidadãos, com formações heterogêneas, que compartilham direitos e deveres da vaga para a qual foram eleitos de forma equitativa. É autoorganizada e se assemelha aos movimentos político sociais descritos por Castells (2017). Não possui compromissos partidários, apesar da filiação ao PSOL, a escolha por um partido foi necessária pela obrigatoriedade legislativa brasileira que não permite candidaturas independentes. Contudo, o grupo deixa claro em sua página que mantém um caráter independente, pluripartidário e colaborativo. O movimento se auto denomina supra-partidário e defende que sejam abertas as possibilidades para candidaturas de não filiados a partidos. Não apresentam uma liderança definida e o peso de voto nas decisões é igualitário, num modelo de governança horizontal, em que todos têm espaço de fala equitativo. Ainda explicam que, em caso de falta de consenso sobre alguma pauta, a co-candidata mais preparada sobre o assunto assume a responsabilidade decisória. Mônica Sanches, que deu nome à candidatura, atua apenas como porta-voz das decisões do grupo no plenário (Bancada Ativista, 2019).

Foi possível observar uma intensa utilização da autocomunicação (Castells, 2017) e documentação de atividades nas redes digitais, concentradas tanto nos perfis em redes sociais da Bancada no Instagram (2019) e no Facebook (2019), bem como nos perfis



peçoais de cada co-participante do mandato. O grupo está baseado fortemente na questão da política identitária e tem como motor as questões da crise da democracia representativa, pois se apoiam justamente no discurso da falta de representação dentro da política tradicional.

Cada integrante se apresenta com a descrição das identificações sociais, demonstrando como este dado é importante para o grupo, sendo bem definidas e reforçadas em diversas postagens nas plataformas de redes digitais. Os integrantes se apresentam da seguinte forma no site: Anne Rammi, artista, feminista e ciclista; Chirley Pankará, pedagoga e militante da causa indígena; Claudia Visoni, jornalista e ambientalista; Erika Hilton, transexual, ativista LGBT e estudante; Fernando Ferrari, militante do Movimento Cultural das Periferias; Jesus dos Santos, ativista do movimento negro; Mônica Seixas, jornalista, feminista e ativista socioambiental; Paula Aparecida, professora e ativista pelos direitos dos animais, e Raquel Marques, sanitarista e ativista pelo parto humanizado (Mônica da Bancada, 2018).

O modelo não é aberto para adoção de novos co-parlamentares, mas incentiva fortemente a participação e a colaboração cidadã dos eleitores nas redes sociais e por meio da organização de eventos populares, debates, palestras, aulas públicas e reuniões comunitárias divulgadas nos canais online. Desde a eleição, em 07 de outubro de 2018, foram contabilizados 40 eventos publicados (Facebook, 2019) e, até o fechamento deste estudo, 20 deles foram encontros abertos para a participação popular no desenvolvimento de políticas públicas, em grande parte com o viés da política identitária (Hall, 2007).

Foi possível observar que a mandata coletiva/compartilhada da Bancada Ativista não se trata de um partido digital (Gerbaudo, 2019), mas apresenta algumas características como intensa utilização das mídias sociais para comunicar decisões, convocar reuniões (a quem possa estar interessado) e engajar cidadãos por meio de uma proposta de transparência radical e de uma participação coletiva/aberta. Ademais, ela não se organizou de forma online, nem se apresentou fora do metiê de partidos políticos existentes como sendo um novo partido online e participativo, mas se utilizou da estrutura de um partido antigo (PSOL), de viés progressista que ofereceu acolhimento e independência decisória ao grupo, para lançar a candidatura. A bancada também não se utiliza de aplicativos nem inscreve eleitores para algum tipo de sistema de votação de pautas online, assim como não escolheu os integrantes dessa forma.



Considerações Finais

Ainda é cedo para se chegar a conclusões definitivas sobre quais impactos esse tipo de candidatura terá sobre a política tradicional representativa brasileira, e se conseguirá cumprir o mandato enquanto coletiva, até por não haver amparo legal no país. A ideia deste estudo foi apontar algumas relações entre a formação de grupo na era digital explanadas por Levy, Shirky, Jenkins e Castells e a formação desse modelo peculiar de representação, efetivamente eleita no último pleito de 2018, no Estado de São Paulo, Brasil.

Aparentemente, a iniciativa se apresenta como uma tentativa de pressionar a forma de se fazer política nos dias de hoje, considerando a relevância dos números relativos à eleição da Bancada Ativista em 2018 e a multiplicação desse fenômeno não só em São Paulo, mas em outras regiões, como a eleição do movimento Juntas no Estado de Pernambuco. A forma de organização, com viés participativo e deliberativo, mais horizontal não é um pensamento novo, contudo, o que é novo é o alcance e a aceitação popular em torno de uma candidatura fora dos padrões da política partidária tradicional brasileira. Foi a primeira vez que um grupo de pessoas, identificadas como suprapartidárias, recebeu tamanho apoio popular numa eleição no país⁴, isso aponta para mudanças sociais e culturais significativas na forma de se pensar a participação política na contemporaneidade.

Pode-se sugerir que os cidadãos acostumados com a agilidade comunicacional dos meios digitais estariam também buscando ideias mais plurais, horizontais e contextualizadas para o fazer político em confronto direto com instituições tradicionais, verticais e burocratizadas, que se distanciaram dos representados, atuando mais por questões de interesse partidários, ou pessoais, do que coletivos. Além de não acompanharem a velocidade das mudanças culturais e sociais impostas pelo desenvolvimento tecnológico, num cenário de globalização.

Notas

¹prigalvaoficial@gmail.com. Mestranda em Estudos Culturais, Universidade de São Paulo

²cynthia.correa@outlook.com. Professora Associada, Universidade de São Paulo

³Foi escolhida a forma feminina para designar o mandato porque é assim que as(os) integrantes da Bancada Ativista se referem e preferem ser chamadas, tendo em vista que o grupo é formado em sua maioria por mulheres, sendo 7 mulheres e 2 homens (Mônica da Bancada, 2018).



⁴ "However, platforms are not neutral, and they imply new hierarchies and power relations. In fact, platformisation often appears as a sort of decoy used by party leaders to concoct the impression of a non-existing or weak and purely facilitatory leadership. Participationist ideology provides an ethical and ideological justification for this turn towards the platform logic" (Gerbaudo, 2019, p.179).

⁵ Sãmia Bomfim foi eleita, pelo PSOL, de forma autônoma, para o cargo de deputada federal pelo Estado de São Paulo nas eleições de 2018. Ela recebeu 249.887 votos, sendo a 8º candidatura mais votada no Estado. Sãmia Bomfim. (2019, 24 de outubro) *In Wikipédia: a enciclopédia livre*. Recuperado de: https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2mia_Bomfim)

⁶ Em 2016 uma proposta de mandato coletivo similar formada por 5 pessoas se elegeu em Alto Paraíso de Goiás, município brasileiro com 7 mil habitantes, para a vaga de vereador com 148 votos, nona candidatura mais votada da cidade.

Borges, F. (07 de outubro de 2016). Cinco 'são eleitos' para uma vaga de vereador em Alto Paraíso de Goiás. *G1 - Globo*. Recuperado de:)

Referências

Azevedo, A. (27 de Setembro de 2018) Justiça Eleitoral permite 9 candidaturas coletivas, entenda. *Correio Brasiliense*. Recuperado de: <https://www.correiobraziliense.com.br/ap>

[p/noticia/politica/2018/09/27/interna_politica,708519/justica-eleitoral-permite-o-registro-de-9-candidaturas-coletivas-ente.shtml](https://www.correiobraziliense.com.br/ap/noticia/politica/2018/09/27/interna_politica,708519/justica-eleitoral-permite-o-registro-de-9-candidaturas-coletivas-ente.shtml)

Bancada Ativista. (2019). *O movimento*. Recuperado de: <https://bancadaativista.org/>

Cardon, D. (2016) As mobilizações de indivíduos na internet. In: Mendonça, R. F., Pereira, M. A., Filgueiras F. (Org.). *Democracia Digital: Publicidade, instituições e confronto político* (287-305). Belo Horizonte, Brasil: Editora UFMG.

Castells, M. (2017) *Redes de indignação e esperança: Movimentos sociais na era da internet*. Rio de Janeiro, Brasil: Jorge Zahar Editor Ltda.

Castells, M. (2018) *Ruptura: A crise da democracia liberal*. Rio de Janeiro, Brasil: Jorge Zahar Editor Ltda.

D'Ancona, M. (2018) *Pós-verdade: A nova guerra contra os fatos em tempos de fake news*. Barueri, Brasil: Faro Editorial.

Facebook (2019). *Bancada Ativista: Eventos*. Recuperado de: https://www.facebook.com/pg/bancadaativista/events/?ref=page_interna



- Friedman, T. L. (2017) *Obrigado pelo atraso: Um guia otimista para sobreviver em um mundo cada vez mais veloz*. São Paulo, Brasil: Editora Schwarcz.
- Gerbaudo, P. (2019) *The Digital Party: Organisation and Online Democracy*. Londres, Inglaterra: Pluto Press. Edição do Kindle.
- Giddens, A. (1991) *As consequências da modernidade*. São Paulo, Brasil: Editora Unesp.
- Hall, S. (2001) *A identidade cultural na pós-modernidade*. (5ª ed). Rio de Janeiro, Brasil: DP&A Editora.
- Han, B. (2018) *Sociedade do cansaço*. Petrópolis, Brasil: Editora Vozes.
- Harari, Y. N. (2018) *Homo Deus: Uma breve história do amanhã*. São Paulo, Brasil: Editora Schwarcz.
- Instagram (2019) *Bancada Ativista*. Recuperado de: <https://www.instagram.com/bancadaativista/?hl=pt-br>
- Jenkins, H. (2009) *Cultura da Convergência*. (2ª ed). São Paulo, Brasil: Editora Aleph
- Justiça Eleitoral. (8 de outubro de 2018). *Resultado de Votação - Eleitos*. São Paulo. Recuperado de: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-sp-deputados-estaduais-eleitos-eleicoes-2018>
- Mônica da Bancada. (2018). *Conheça os co-candidatos da Bancada Ativista; Perguntas e Respostas*. Recuperado de: https://monicadabancada.com.br/candidatura-coletiva?fbclid=IwAR3DqtVmdQVgdng1wMG1HvnKKt1d_vGnfBYpgeOH-N6nPtzZMeng-MFFNo0
- Morozov, E. (2018) *Big Tech: A ascensão dos dados e a morte da política*. São Paulo, Brasil Ubu Editora. Edição do Kindle.
- Levy, P. (2010) *Cibercultura*. (3ª ed). São Paulo, Brasil: Editora 34.
- Shirky, C. (2012) *Lá vem todo mundo: O poder de organizar sem organizações*. Rio de Janeiro, Brasil.
- Silveira, S. A. (2016) Insurgências, redes de opinião e coletivos de intervenção. In: Mendonça, R. F., Pereira, M. A., Filgueiras F. (Org.). *Democracia Digital: Publicidade, instituições e confronto político* (345-366). Belo Horizonte, Brasil: Editora UFMG.
- Voto Legal. (2018) *Bancada Ativista: Candidato a deputado estadual*. Recuperado de: <https://votolegal.com.br/em/bancadaativista/>



Juventudes, mobilizações e ativismos contemporâneos no Brasil¹.

Frank Marcon

Resumo

A sequência de eventos econômicos, políticos e sociais, como a crise econômica em 2013; as Eleições presidenciais em 2014; a intensificação da Operação Lava Jato e o *impeachment* da Presidente Dilma Rousseff, em 2015; além das reformas liberais e as investigações sobre corrupção contra o Governo Michel Temer, intensificaram e atomizaram as manifestações e o ativismo adquirindo diferentes formas e mobilizando diferentes grupos sociais dependendo do momento, do contexto e dos interesses em jogo. De este modo, a proposta aqui é analisar como estas manifestações ocorreram, modularam e se transformaram em termos estéticos, ao passo dos principais acontecimentos políticos.

Palavra chave

Protesto; Ativismo; Estetização; Repertório; Brasil

Ruas e Redes: Agências Estéticas do Ativismo e do Protesto

Entre os anos de 2011 e 2016, a intensidade de movimentos políticos, articulados ou difundidos pela internet foi extremamente diversificada, numerosa e visível. Somente no mês de abril de 2016, estavam ao mesmo tempo sendo realizados vários atos de protesto e manifestações de rua por diferentes motivações em grandes cidades como Buenos Aires, Barcelona, Benguela, Lima, Lisboa, Luanda, Madrid, Paris, Santiago, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os motivos, encontramos crises políticas, crises econômicas, reivindicações de direitos humanos e democracia.

Entre os formatos: acampamentos, escrachos, marchas, noites de vigília, ocupações de praças, ocupações de centros públicos, greves e diversos atos performativos. Seja como for, as tecnologias móveis estiveram presentes em todas estas manifestações, informando, captando e transmitindo imagens dos e pelos próprios participantes. Destaco tal questão pela importância que ela tem para exemplificarmos a intensidade e a diversidade dos lugares, dos contextos políticos, das motivações e dos formatos em vários espaços e sobre as mais distintas realidades. Alguns estudiosos dos movimentos sociais têm chamado a atenção sobre esta mudança de comportamento para manifestações frequentes e uma participação política direta através de tais



manifestações nas redes sociais digitais ou nas ruas (Castells, 2012; Feixa, 2014; Gohn, 2014; Pleyers, 2013, entre outros).

Neste momento, eu gostaria de destacar que em todos os casos mencionados, não só as ações nas praças e nas ruas da cidade assumiram um grande protagonismo, senão também principalmente as manifestações e o ativismo via internet possibilitaram maior visibilidade e assumiram o papel de informar aos envolvidos e convocar os protestos. Em muitos destes casos, o protesto nas ruas e praças se converteram em um complemento do ativismo nas redes sociais ou vice-versa. Para além disto, os protestos se tornaram cíclicos e passaram a conectar as redes às ruas e vice-versa convertidas em um modo corrente de participação política. Os protestos dos últimos anos compõem um cenário em que as pessoas passaram a acessar a informação, o conhecimento e à comunicação de forma mais intensa e mais aberta, de acordo com os seus interesses.

Ao menos desde a chamada Primavera Árabe e dos movimentos dos *indignados* nos países do Sul da Europa, tem emergido uma modalidade de recurso expressivo no fazer político, que vem demonstrando um modo de viver e de compreender a política que tem relação com as transformações ocorridas na vida cotidiana das pessoas em termos sociais e tecnológicos. Neste momento, as manifestações e os protestos na rua passaram a ter uma linguagem mais corporal, com maior ênfase na diversidade de formas de dizer e de entender o processo político em que se está envolvido e o que se pensa sobre ele. As linguagens artísticas do teatro, do cinema, da TV, da música, da literatura, do desenho, da escultura, da pintura têm sido cada vez mais utilizadas, acessadas, editadas, mimetizadas, mescladas e compartilhadas em tais contextos (Lipovetsky y Serroy, 2015).

Na última meia década, os protestos têm se diversificados em causas, em lugares, em formatos, em criatividade. Os suportes móveis foram incorporados ao protesto como meio de comunicação, meio convocar e meio para produzir linguagens ativistas. As redes sociais virtuais, as produções de conteúdo e as conexões instantâneas a partir dos dispositivos móveis transformaram a linguagem das redes e transformaram os próprios dispositivos em ferramentas de protesto. Por sua parte, as expressões sonoras, escritas e performativas se converteram em formas de agências estetizadas predominantes nas manifestações políticas, seja na topografia da cidade ou no ciberespaço.

Entre as características deste fenômeno, ressalto a intensificação da participação política direta e a maior visibilidade do ativismo. O acesso e o uso das tecnologias



moveis transformaram o modo das expressões políticas, ampliaram e prolongaram as ruas em redes e as redes ruas, ampliando as formas de produção e reprodução estéticas das agencias políticas. A ironia, o sarcasmo, o drama, o humor e o hiper-realismo foram alguns dos estilos presentes em forma de imagens, vídeos, sons e textos desde os protestos iniciados com as jornadas de junho. Neste sentido, a estetização tem passado a funcionar também como mimeses das práticas de expressão e comunicação nas redes, nas quais a apelação ao visual e ao sonoro carregam as características do contexto da interação, da produção e do consumo digital, que implica velocidade, instantaneidade, criatividade, colaboração, intercâmbios e solidariedades.

O que pretendo é entender como estas formas de ativismo e de protesto aparecem esteticamente nas ruas e nas redes sociais, como circulam dentro e fora dele e como passaram a disputar a produção de informação com as redes de produção de informação hegemônicas, considerando, ainda, a modulação da opinião pública a partir do controle algorítmico na internet (Silveira, 2019). Este como um novo dispositivo de controle e interferências nos processos políticos e nos protestos e ativismos também entrou em ação, embora de forma mais perceptível nos contextos das eleições de Trump, em 2016, no plebiscito do Brexit, em 2016, e mais tarde nas eleições de 2018 no Brasil.

Três ondas de protesto no Brasil

O caso do Brasil parece adequado para pensar como os contrastes entre diferentes formas de estetização emergem destas novas possibilidades de agência política. Para isto centro a atenção no que considero serem três ondas de protestos que ocorreram nos últimos quatro anos no Brasil, que oferecem casos para analisar o fenômeno dos ativismos e dos protestos e suas idiosincrasias na era da estetização do cotidiano (como dizem Lipovetsky e Serroy) e da geração digital (como diz Feixa): 1) a onda das “Jornadas de Junho de 2013”; 2) a onda dos protestos tanto contra quanto a favor do Governo Dilma (2014-2016); e 3) a onda “Fora Temer” (2016-2017).

A onda de manifestações conhecidas como “Jornadas de Junho de 2013” foi uma avalanche de protestos que surgiram primeiramente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, exigindo a melhora na qualidade dos serviços públicos (transporte, saúde, educação, segurança e contra a corrupção), que se estenderam rapidamente por dezenas de cidades do país (Arantes y Schwarcz, 2013). As manifestações se estenderam a partir das demandas de coletivos de estudantes por “passe livre” nos transportes públicos para logo protestarem contra a violência policial, ampliando as



demandas com a reivindicação geral exigindo a melhora nos serviços públicos, que se intensificaram durante o mês de junho daquele ano e se estenderam durante alguns meses com intensas manifestações nas redes sociais e nas ruas. Os manifestantes consideravam o movimento como apartidário, não permitindo bandeiras que identificassem partidos, utilizando linguagens e símbolos emergidos das redes virtuais, cartazes individuais com frases diversificadas, curtas e irônicas, usando disfarces, máscaras e os rostos pintados. Estas manifestações chegaram a reunir dezenas de milhares de pessoas. Os cartazes e os slogans nas redes sociais revelaram que não havia uma unidade nas motivações, porém uma vontade dispersa por parte das pessoas que ocuparam as ruas, por se manifestarem por algum motivo, por expressar suas angústias, por protagonizar uma agência política, por se fazerem ouvir e poderem ouvir “suas próprias vozes”.

Além dos militantes de coletivos sociais com experiências políticas anteriores (ativistas pela gratuidade dos transportes coletivos, membros das organizações midiocivistas, das organizações estudantis, dos coletivos anarquistas, dos movimentos sociais por direito à moradia, de coletivos anticapitalistas e de ativistas dos chamados *Black Blocs*), a grande maioria dos participantes nas manifestações de rua em 2013 eram jovens que estavam participando pela primeira vez de ato de protesto político.

Segundo a pesquisa realizada pelo *Instituto Data Folha* e publicada no *Jornal Folha de S. Paulo*, durante as manifestações do dia 17 de junho de 2013, foram aproximadamente 215 mil participantes em várias cidades do Estado, sendo 65 mil em São Paulo. Entre estes, 81% dos participantes se informaram sobre as manifestações por Facebook, 84% dos manifestantes não tinham preferência por nenhum partido político, 71% participavam pela primeira vez de uma manifestação, 53% tinham menos de 25 anos e 77% das pessoas tinham educação superior (*Folha de São Paulo, Caderno Cotidiano, 18 de junho de 2013*).

Os protestos de junho foram estendidos pelas redes sociais e pelos meios de comunicação alternativos através da Internet e rapidamente convocaram milhares de pessoas às ruas. A vezes se manifestavam de modo auto organizado, criando formas de comunicação coletiva a través dos dispositivos móveis ou através de mensagens boca-a-orelha e produzindo manifestos em forma de *jogral*, com frases repetidas e reproduzidas coletivamente entre os grupos como microfones humanos; dessa maneira, todos tinham acesso às informações. Os manifestantes também realizavam, gravavam, em meio digital, produzindo conteúdo informativo sobre o acontecer dos protestos e



proteger-se da violência policial; produziram também pedagogias de orientação para os manifestantes para proteger-se da violência ou do autoritarismo policial. Se comportavam de modo diversificado e expressivo nas ruas. O movimento de junho de 2013 só perdeu presença pouco antes das eleições majoritárias de 2014.

Em segundo lugar, encontramos a onda das manifestações ocorridas desde fins do ano de 2014 até março de 2016. Os protestos se iniciaram com os chamados dos movimentos contra a reeleição de Dilma, reclamando pela abertura de um processo de “Impeachment de Dilma”. Como respostas, rapidamente apareceram manifestações de sinal contrário, encabeçadas por grupos sociais em defesa da Presidenta, conhecidos como “Não Vai ter Golpe”.

Os movimentos pelo Impeachment se autodefiniam como suprapartidários e foram apoiados por entidades e organizações como FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), algumas redes da imprensa, ganhando o apoio extraoficial de partidos políticos da aliança derrotada nas urnas. Os principais líderes destes coletivos eram homens entre 20 e 40 anos, profissionais liberais, empresários e estudantes. Estes grupos políticos não existiam antes das “Jornadas de Junho” de 2013, só surgiram depois daquelas mobilizações como o *Movimento Brasil Livre* e o *Vem pra Rua*. Estes grupos utilizaram as tecnologias digitais de comunicação e as redes sociais virtuais para difundir ideias e convocações de protestos, sugerindo aos participantes a maneira de vestir-se, especialmente com as cores nacionais, o verde e o amarelo. Todo o repertório já experimentado nas mobilizações de 2013 como a Internet e a popularização do uso de *Smartphone* foram postos ao serviço da indignação contra os resultados eleitorais de 2014 e a mobilização para provocar a queda do Governo recém eleito. O WhatsApp e Facebook foram os canais de comunicação mais utilizados para preparar e convocar estas manifestações.

As demonstrações foram organizadas nas capitais dos maiores estados, convocadas para os finais de semana, em horas diurnas, com concentrações e desfiles em torno das ruas e praças consideradas centros de lazer e de finanças, como a Av. Paulista em São Paulo, ou a Av. Atlântica no Rio de Janeiro.

Foram utilizados carros de som, que convidavam aos artistas que apoiavam o *impeachment* a atuar e que, com frequência, executavam o hino nacional durante as manifestações. Aos poucos os coletivos impulsores iniciais foram somando-se a multidões de pessoas para demandar saída da Presidenta Rousseff, convertendo-se nos protestos mais numerosos do Brasil. Neste caso, o perfil dos manifestantes,



inicialmente formado por jovens de classe média, escolarizados, entre 18 e 40 anos, se converteram em um perfil socialmente muito diverso, incluindo diferentes classes sociais, grupos etários e diferentes níveis de escolaridade².

Sem dúvida, depois da reeleição de Dilma Rousseff e durante a abertura do procedimento de *impeachment*, apareceram as primeiras evidências claras de polarização dos protestos nas ruas. Divergências ideológicas, nas formas de ativismo e na atuação nas ruas e nas redes, símbolos e cores foram monopolizados com o surgimento de antagonismos mais radicais.

Alguns defensores do *impeachment* de Dilma Rousseff vieram a definir-se como organizações ideológicas da direita, por um lado, e, por outro lado, manifestações em favor do Governo Dilma começaram a crescer nas ruas. Diferentes grupos sociais, sindicatos, partidos e movimentos sociais foram posicionados na defesa do governo de Dilma e Lula, e contra o que chamaram de "golpe" contra o governo e o projeto político recém-eleito. Verde e amarelo foram cores predominantes entre os que se opõem ao Presidente, enquanto o vermelho, laranja, amarelo e preto foram as cores comumente usadas pelos defensores do governo de Dilma, em uma disputa clara sobre os símbolos e seus significados. Os espaços das manifestações e marchas também se tornaram disputados, como o vale de Anhangabaú (espaço tradicional de estudantes e protestos populares) e Av. Paulista (recentemente transformado em espaço para demonstrações do classe) em São Paulo. Esta disputa sobre lugares e espaços de protesto tem uma relação direta com a memória política de protestos passados e recentes e o significado ideológico de tais atos.

Um exemplo do movimento "não vai ter golpe", que se opõe a movimentos e protestos para o "impeachment de Dilma" foi o apelo para uma grande manifestação em 31 de março de 2015. Em uma publicação do coletivo "jornalistas livres", por exemplo, existem várias imagens que demonstram uma linguagem estética e um repertório particular que também envolve as formas e a escolha de espaços de protesto, de temporalidades e por memórias do políticos. Neste caso, as frases repetidas também eram pela reivindicação de "democracia", de forma central.^{3, 4}

Uma terceira onda de manifestações surgiu depois do impeachment de Dilma, tornando-se conhecida como manifestações "fora temer". O "Fora temer" tornou-se o centro do ativismo político desde que ele atordoou o Presidente. Entre 2016 e 2017, o #foratemer foi um dos *hashtags* mais populares nas redes sociais no Brasil. Durante ou pela primeira vez governo, marchas regulares, ocupações escolares, escrachos,⁵ e as várias



performances em praças e ruas, em frente ou dentro de órgãos de administração pública, principalmente em edifícios nos sectores administrativos da educação e da cultura e dos poderes legislativos federais, estaduais e municipais. Após os últimos anos da primeira onda de grandes protestos da era digital não o Brasil, que começou em junho de 2013, manifestações políticas na rua e na Internet permanecem ativas e constantes.⁶

Politização do estético no ativismo contemporâneo

Poucos meses após a grande onda de protestos que começou em junho de 2013 e seu arrefecimento, as ocupações de praças públicas e instalações para fins culturais e políticos voltaram a tornar-se recorrentes e espontâneas em várias cidades. Dezenas de escolas e universidades foram temporariamente ocupadas entre 2014 e 2016, com as mais diversas demandas: pela democratização das instituições ou espaços públicos; para dar visibilidade a uma causa específica; ou de alguma forma fazer uma crítica geral do mercado financeiro, corrupção, violência policial ou políticas governamentais centralizadas e autoritárias. Os escrachos e os atos performativos continuaram sempre com um tom político e com objetivos diferentes, contribuindo a uma relação da sobreposição entre atos políticos em linha e off-line mais intensamente.

No que diz respeito às grandes manifestações de rua, após a reeleição do presidente Dilma em outubro 2014 podemos ver algumas diferenças nos estilos. Desde então, surgiram outras formas de organização mais estruturadas e mais unificadas, que foram entendidas como herdeiras dos movimentos de junho e são organizadas em torno de ideias generalizadas contra o governo de Dilma, contra a corrupção, alegando ao mesmo tempo serem movimentos autônomos não relacionados aos partidos políticos. Se organizaram em seções em todo o estado, através de redes sociais como o *movimento Brasil livre*, *Vem pra Rua* e *Revoltados on-line*. As diferenças entre os objetivos e as formas de estatização dessas diferentes formas de entendimento do ativismo apontam para a reprodução comum de alguns repertórios de junho de 2013, embora com certas diferenças, tais como: a estrutura mais centralizada de organização na forma esteticamente mais homogênea de formas de manifestação, na definição de critérios sobre o uso de roupas com certas cores; na forma como os discursos públicos foram definidos; agendamentos de protesto programados com horários e lugares bem definidos. Além disso, o perfil social desses participantes era bastante diferente dos de 2013 em termos geracionais, mas também em termos de outras características sociais (classe, etnia, gênero, religião e ideologias).



Nos anos 2015 e 2016, durante as manifestações organizadas pela *MBL*, *Vem pra rua* e *Revoltados on-line*, em Brasília, e os protestos em que as pessoas usavam verde e amarelo, muitos vestindo a camisa do time de futebol brasileiro, outros pintando seus rostos ou usando máscaras em alusão aos personagens políticos que estavam sendo criticados ou homenageados. Outras formas de protestos organizados pelas redes sociais foram painéis em dias pré- definidos pela cronologia do impeachment do Presidente, ou quando ocorria algum pronunciamento na TV. Nesses protestos, a reivindicação de expressões de diferentes grupos sociais não foi ouvida ou vista, e as manifestações procuraram expressar uma ideia de unidade, como se representasse uma reivindicação nacional massificada, homogênea. É o caso dos jovens considerados protagonistas dos protestos de junho 2013, que apareceram mais como um símbolo das manifestações pelo *impeachment*, sendo diluídos na ideia de todo indiferente. Esta onda de protestos, que durou mais de um ano, foi expressada esteticamente de forma hegemônica e uniforme, na qual prevaleceu a ideia de nacionalismo, de pessoas e de unidade moral como princípio de unidade e como alegoria nacionalista. Além disso, os movimentos foram institucionalizados em torno de alguma liderança e passaram a comercializar os símbolos de suas campanhas, como camisetas, adesivos, canecas e outros objetos com slogans como "*meu partido é o Brasil*", "*Somos todos moro*" e outros artefatos contra Dilma, Lula e o PT, alegando que a venda desses produtos subsidiou as atividades dos movimentos.

Por outro lado, as manifestações contra o *impeachment de Dilma* e a favor de Lula foram organizadas por sindicatos e partidos políticos que são definidos dentro do espectro da esquerda, acusando as outras manifestações de promover um golpe de estado. Neste caso, vários dos repertórios de 2013 reapareceram isoladamente, embora a estrutura das grandes manifestações de rua também aparecesse de forma mais orgânica e programática, sendo definida por sindicatos e partidos políticos. Carros com dispositivos de som, representante de sindicatos e bandeiras de partidos de esquerda passaram a compor a estética desses atos que reuniram algumas milhares de pessoas. Desta forma, alguns grupos e pessoas que se consideravam autônomas e não relacionadas com estas instituições apoiaram as manifestações, acrescentando à principal razão de serem contra o "golpe" e continuaram a usar performances, escrachos e as mídias digitais como uma forma de ativismo.

Depois que o Presidente Temer assumiu o governo, o movimento "*Não Vai ter Golpe*" foi transformado em "*Fora Temer*", ganhando um número ainda maior de seguidores,



mesmo entre os adversários de Dilma. Em maio 2016, notícias e mensagens sobre mídia social disseminou vários atos de protesto no Brasil contra o fim do Ministério da Cultura e sua integração no Ministério da Educação pelo governo Temer; contra o decreto de reforma do *Ensino Básico*, sem discussão com a sociedade civil; e contra vários projetos de leis, de clara orientação liberal, para alterar as leis trabalhistas e previdenciárias que o governo Temer trouxe à *Congresso Nacional*. Como forma de resposta, as pessoas ligadas ao campo cultural ocuparam as secretarias estaduais do Ministério da Cultura em mais de dez Estados do país; estudantes e professores ocuparam escolas públicas e universidades; e sindicalistas e movimentos sociais realizaram várias manifestações de protesto em muitas cidades do Brasil.

Os escrachos se converteram cada vez mais comuns, os coletivos saíram às ruas procurando satirizar e coagir o Presidente. Em Aracaju, por exemplo, o coletivo *Levante Popular da Juventude* realizou um ato em um terminal de de ônibus urbano, que denominou *Noite das Bruxas*, onde garotas incendiaram com pó químico uma expressão "Fora Temer". A performance transmitia a ideia de exorcizar o Governo. As manifestações com atos dramáticos, apresentações musicais, marchas com cantos, consignas e slogans, e as ocupações, onde se mesclavam manifestações e performances foram registradas em vídeo e divulgadas a través das redes sociais.

O movimento "fora temer" iniciou muitas campanhas virais através da mídia social, como o "*vomitação*", na qual os manifestantes passaram a replicar um *Emoji* que representava o sentimento e o desejo de Repulsa estacológica aos atos do Governo. Ativistas apontaram dia e hora para postar o *Emoji* com a imagem de vômito nas páginas de mídia social dos perfis públicos de pessoas representando o governo Temer ou sobre notícias e manifestações públicas que eles fizeram, buscando expressar sua indignação. O chamado "*vomitação*" começou na Internet e levou para as ruas, também aparecendo como uma intervenção de arte de rua ou em adesivos, camisetas e banners de manifestantes apelando para o significado que saiu da publicação da Internet, em um fenômeno social mimético da estética dos protestos, que retraduzem a prática e o imaginário da Internet para as ruas e vice-versa.

Essas afirmações contrárias aos postulados governamentais permanecem ativas, representadas pelo "fora temer", que frequentemente aparece em declarações políticas, independentemente de seus motivos, atos de desempenho, escrachos, ocupações e protestos na rua, ou na Internet através de memes, *Gifs*, *emojis* e mídia ativismo em geral. No caso específico do mídia ativismo, que ganhou maior visibilidade e importância



nas mídias sociais *dos dias de Junho de 2013*, os recursos foram mantidos ativos em vários dos princípios de produção e circulação de informações resultantes dessas manifestações. Estes grupos continuam a produzir coberturas colaborativas com tecnologia de aquisição de baixo custo e técnicas de transmissão através da Internet, utilizando vários recursos estéticos sonoros e visuais, bem como assumindo novas abordagens, com linguagens mais direto, começando com eventos e recorrendo a questões fora da imprensa mainstream. Ao lado das práticas de ocupação, uso de desempenho e ativismo digital, esta é talvez uma das mudanças mais significativas no comportamento do ativismo e formas de protesto no Brasil nos últimos anos, a legitimação da produção e a desfocagem informações independentes e de longo alcance através de vias não convencionais.

Como novas linguagens e tecnologias deslocaram a perspectiva e entendimentos dos padrões hegemônicos de informação e contribuem para desconstruir as narrativas formais, exclusivas, formatadas e padronizadas de jargão jornalístico, que vêm a coexistir com perspectivas, sequências, cortes e narrativas desviadas dos cânones. A criatividade e a capacidade de produzir e circular informações autonomamente permitiram a visibilidade de outras formas de ver e agir como protesto, que reinventam as suas formas de ação, bem como as suas formas de comunicação e de linguagem.

Com essas transformações nas práticas e nos sentidos da participação política, um certo individualismo surgiu no meio do ativismo e acentuou-se através desses objetos em movimento que vieram equipar os indivíduos protestantes. Assim, a dinâmica de individualização do uso de objetos utilizados para consumir e produzir comunicação, informação e acesso ao conhecimento também influenciou a forma de expressão, consciência e emoção que apareceram nas manifestações políticas coletivas, mediadas ou não por tais tecnologias.

Considerações finais

Muito tem sido escrito e dito sobre como as manifestações começaram no Brasil desde 2013, mas pouco foi dito sobre seus propósitos, suas continuidades e suas mudanças. Aqui eu tentei apontar algumas dessas continuidades e descontinuidades que ocorreram com ativismo e protesto político no Brasil, tentando apontar para as circunstâncias e as diferenças entre as três ondas de protesto analisadas, mas também sobre o que os torna iguais. Enfatizei que desde 2013 a participação direta se intensificou através das mais diferentes manifestações políticas na rua e na Internet; e que houve continuidades e rupturas entre as três ondas de manifestações que se



seguiram aos *dias de junho*, destacando-se, principalmente, os modos de fazer, os valiosos aspectos simbólicos e as características sociais dos participantes.

Estas manifestações foram, de algum modo, consolidando dois campos simbólicos do ativismo que acabaram por interferir nos rumos do processo eleitoral de 2018, que culminou com a eleição de Bolsonaro. A estética nacionalista, associada a defesa de valores moralistas conservadores sobre a vida pública e privada, foram sendo apropriadas por alguns dos grupos que se apropriaram de algumas pautas dos primeiros protestos de 2013 e se fortaleceram a partir das redes sociais quando se uniram pela pauta do impeachment, do antipetismo, antiesquerdismo e do antilulismo. No último ano do desastroso governo Temer abriu espaço para polarização eleitoral entre PT, como representante da esquerda, e Bolsonaro, como representante de um nacionalismo moralista.

Aqui gostaria de fazer um adendo sobre esta polarização, que tem relação com os dispositivos tecnológicos desenvolvidos a partir de algoritmos associados a captura de informações dos usuários das redes sociais digitais, utilizados para depois organizar as preferências de publicidade e de mensagens que sustentem as próprias convicções de seus usuários ou lhes permitam decidir por um lado ou outro do espectro polarizado, a partir de mensagens estimuladas. Ou seja, as empresas que dominam estes dados e esta de difusão de imagens nas redes sociais digitais passam a ser contratadas por interessados nos resultados eleitorais para modular intensamente a informação acessada pelos os usuários das redes, a ponto de interferir na sua forma de ver o mundo e nas suas decisões políticas. As mudanças na forma de fazer protestos transformaram a política na última década, em um primeiro momento ganhando mais visibilidade e ampliando a participação em sua diversidade, mas em um segundo momento passou a sobre a interferência de dispositivos controlados por corporações que passaram a interferir no jogo de polarização política.

Analisando o fenômeno ao longo dos últimos no Brasil aparecem algumas nuances importantes, entre táticas e práticas que se assemelham, mas também diferem. Os três ciclos de protestos foram caracterizados como: 1) sendo convocados através do uso de redes sociais e pelo uso de tais tecnologias durante manifestações, registrando suas experiências e transmitindo informações do ponto de vista do participantes 2) por produzir a espetacularização através da criatividade no uso de imagens, sons e textos, bem como realizando atos performativos; 3) por ações realizadas em espaços urbanos com marchas, ocupações, camping e intervenções estéticas; 4) por prazer, motivação



e satisfação na interação e expressão política diária; 5) por progressivamente passarem a ser modulados pelas corporações das empresas de tecnologia de comunicação e informação que controlam os dados e as mensagens de seus usuários.

Nesse sentido, a estética do protesto deve ser analisada pelo formato, pelos suportes, pelos sujeitos, pelas expressões simbólicas, pelos efeitos procurados pelos atores, mas também pelos processos de mediação da informação e suas formas de controle no mundo digital. Por um lado, o ativismo na era digital abriu espaço para muitas pessoas se tornarem atores politicamente mais envolvidos e "uma nova geração" de ativistas descobriu novas formas de mudança política, através da capacidade de comunicar-se e organizar-se, embora a eminência parda das corporações que controlam o processamento das informações e que alimentam as redes sociais digitais detenham inteligência e tecnologia para modular as preferências de consumo, de humor e as escolhas políticas de seus usuários.

Notas

¹ Uma outra versão bastante modificada deste texto foi publicada na Revista Ponto Urbe, em 2018: <https://journals.openedition.org/pontourbe/4539>.

² Em 15 de março de 2015, segundo o Instituto de Pesquisa Data Folha, 1,7 milhões de pessoas saíram às ruas para protestar contra o Governo de Dilma e a favor do Impeachment. Entre os manifestantes 82% votaram em Aécio (PSDB) para presidente, 69% declararam voto em branco e 68% ganhavam mais de cinco salários mínimos.

³ Em 13 de março de 2015, foram realizadas manifestações em 19 capitais em apoio ao governo de Dilma, organizada pelo PT, sindicatos e movimentos sociais populares. Em 17 de abril de 2016, os movimentos para manter Dilma no governo, *não vai ter golpe* encontram-se no Anhangabaú, a primeira vez que duas manifestações de sinal oposto ocorrem simultaneamente.

⁴ Ver post do *Jornalistas Livres*: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/posts/355500354573848>

⁵ Desde maio 2016, quando Michel Temer assumiu a Presidência, a expressão *fora Temer* foi usada como uma forma de protesto. /

⁶ Quando o governo assumiu, em maio de 2016, o Presidente Temer fechou o *Ministério da cultura*, subsidiando ao *Ministério da educação*. O evento gerou um intenso movimento de artistas contra o novo Presidente. Além disso, o fato de que não havia mulheres como ministros em seu gabinete também provocou protestos de grupos feministas.



Bibliografía

Alonso, Angela. 2012. "Repertório, segundo Charles Tilly: história de um conceito". *Sociologia & Antropologia*.v.02.03: pp 21–41.

Arce, José Manuel Valenzuela. 2015. *El sistema es antinosotros; culturas, movimientos y resistencias juveniles*. Barcelona: Gedisa Editorial.

Bayat, Asef. *Life as Politics*. 2010. *How Ordinary People Change the Middle East*. Amsterdam: Amsterdam Universited Press.

Castells, Manuel. 2012. *Redes de indignacion y esperanza: los movimientos sociales en la era de internet*. Madrid: Alianza Editorial.

Clifford, James. 1997. *Routes: travel and translation in the twentieth century*. London: Harvard University Press.

Feixa, Carles. 2014. *De la generacion @ a la # Geração: a juventude na era digital*. Barcelona: NED.

Feixa, Carles; Perondi, Maurício e Castro, Guilherme. 2015. "O Peregrino Indignado: Topias e Utopias do 15M". *Revista Tomo*, n. 27. jul/dez: 397-428.

Gohn, Maria da Glória. 2014. *Sociologia dos movimentos sociais*. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez.

Hall, Stuart e Jefferson, Tony (ed). 2014. *Rituales de Resistência: subculturas juveniles en la Gran Bretaña pós-guerra*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Lipovetsky, G. e Serroy, J. 2015. *A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista*. São Paulo: Companhia das Letras.

Lima, Venício A. de. 2013. "Mídia, Rebeldia Urbana e Crise de Representação". In: Arantes, Paulo Eduardo (org.). *Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil*. Boi Tempo.

Martin-Barbero, Jesús. 2008. "A mudança na percepção da juventude: socialidades, tecnicidades e subjetividades entre os jovens". In: Borelli, Silvia H. S.; Freire Filho, João (orgs). *Culturas juvenis no século XXI*. São Paulo: EDUC.

Pleyers, Geoffrey. 2013. "Ativismo das ruas e on line dos movimentos pós- 2011". *Lutas Sociais*, São Paulo, vol.17 n.31, jul./dez: 87-96.



Silva, Sandra Rubia da. 2012. “De afetos e de memórias: o consumo do telefone celular como *tecnologia afetiva*”. In: Rial, Carmen, Silva, Sandra R. e Souza, Angel Maria de (org). Consumo e Cultura Material: perspectivas etno- gráficas. Florianópolis: Ed. UFSC.

Silva, Helena A. e Ziviani, Paula. 2014. “Apresentação”. In: Silva, Regina Helena Alves da (org). Ruas e Redes: dinâmicas dos protestos BR. Belo Horizonte: Autêntica.

Silveira, Sergio Amadeu da. “Democracia e os Códigos Invisíveis: como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas”. São Paulo: Edições Sesc, 2019.



La práctica política y la construcción de la autonomía zapatista: Los gobiernos autónomos y el ejercicio del poder.

Vladimir Viramontes Cabrera
Silvana Figueroa Delgado

Resumen

Una vez expresada la negativa del Estado mexicano y la élite política para reconocer constitucionalmente los Derechos y Cultura Indígena plasmados en los Acuerdos de San Andrés, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) decidió impulsar su aplicación, incorporándolos a la construcción de su proyecto de organización societal basado en la autonomía y libre determinación de los pueblos. En este trabajo se pretende indagar en dicha experiencia y, se pone énfasis en aquellos aspectos que dan cuenta de una práctica política distinta.

Para abordar el tema propuesto, en primera instancia, ahondaremos en la noción de autonomía, retomando el marco referencial internacional. En un segundo momento, se enfatizará en la naturaleza antisistémica del concepto. Posteriormente, estudiaremos las condiciones materiales y políticas edificadas por el zapatismo en la marcha por la construcción de su propia autonomía. Éstas se fundamentan en dos pilares: la apropiación y organización territorial, y; la instalación de estructuras de autogobierno. El cuarto apartado se destina a remarcar la democracia con la que se conducen las comunidades zapatistas. Finalizamos con una síntesis de dicha experiencia, considerada por nosotros como una de las más importantes de América Latina en la construcción de una alternativa de sociedad diferente a la hegemónica.

Palabras clave

Neoliberalismo; Movimientos sociales; Zapatismo; Autonomía; Autogobierno.

Fundamentos de la autonomía y su concreción en México

El Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) constituye el marco de referencia a nivel internacional sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Se trata de un instrumento creado por el derecho internacional en virtud de ampliar el reconocimiento hacia los pueblos originarios: concebirlos como *sujetos de protección en términos culturales*. Esto es, como sujetos sociales con concepciones y prácticas religiosas, lingüísticas, políticas y jurídicas propias. Constituye, entonces, un paso importante en la reivindicación de su libre determinación y autonomía; las comunidades indígenas, en dicho convenio, son reconocidas como *pueblos* con



identidad, con raíces históricas y organización propia, es decir, en una relación orgánica con sus territorios.

El Convenio 169 fue firmado por el gobierno mexicano en 1989 (Cfr. López y Rivas, 2005b, p. 50), pero violentado enseguida por el mismo con la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, que significó, entre otras cosas, una ofensiva al carácter inalienable de tierras indígenas y un peligro a la cohesión de las comunidades. Los Acuerdos de San Andrés, suscitados de los diálogos de paz, representaron la oportunidad de reincorporar en el escenario el respeto a la autonomía como modo de ejercicio colectivo de los pueblos originarios de México:

La autonomía es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del Estado Nacional. Los pueblos indígenas podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, conforme a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. El ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas contribuirá a la unidad y democratización de la vida nacional y fortalecerá la soberanía del país (Cfr. Hernández, Vera, & (Comp.), 2004, p. 68).

En suma, los Acuerdos de San Andrés reconocían a las comunidades indígenas como colectividades con capacidad de decidir sobre su propio destino y sus asuntos fundamentales dentro del Estado mexicano. Lo anterior, implicaba entender al Estado Nacional como uno pluricultural, cuya base fuera el respeto a la diferencia, cosmovisión y prácticas de los pueblos, permitiendo formas de convivencia política más democráticas y, por ende, el surgimiento de nuevas formas de hacer política. De acuerdo con López y Rivas (2005b, p. 63):

Las demandas de la autonomía implican que los pueblos indígenas puedan ser reconocidos como sujetos de derechos políticos colectivos e individuales, con capacidad de definir sus propios procesos económicos, sus formas comunitarias y regionales de gobierno, su participación en los órganos de jurisdicción estatal y representación popular, el aprovechamiento de sus recursos naturales y la definición de sus políticas culturales y educativas, respetando los usos y costumbres que les dotan de identidad y les permiten resistir la hegemonía de un Estado y un régimen político que los ha mantenido olvidados y marginados por siglos.



Si bien los Acuerdos se apegaron en lo fundamental a lo estipulado en convenio 169 de la OIT, y fueron firmados por el gobierno federal, éste también los abandonó e incluso impulsó una contrarreforma en la que se desconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho.

El carácter antisistémico de la autonomía

La razón por la cual el gobierno mexicano no cumplió lo que firmó fue porque, en la tónica del modelo económico vigente, las autonomías que los Acuerdos de San Andrés reconocen se levantan como un obstáculo para el acceso libre del capital a los recursos naturales y estratégicos que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas. La élite gobernante vio “en ellos un espacio para la organización y desarrollo de los pueblos indios al margen del tradicional control gubernamental, y un instrumento legal que les permitiría a las comunidades resistir, en condiciones menos desventajosas” (Hernández Navarro, 2004, pp. 227-228) los planes y proyectos regionales de despojo promovidos en la fase neoliberal de acumulación del capital. Los territorios debieran estar vacíos de interferencias políticas o locales –en especial colectivas– que impidan el funcionamiento irrestricto del mercado.

La autonomía a través de la organización, la resistencia y rebeldía de los pueblos indígenas de México, en este caso de los pueblos zapatistas, es tanto una *respuesta* a la exclusión y marginación histórica, como un *mecanismo* de sobrevivencia –basado en prácticas comunitarias– ante la actual lógica depredadora del capital que busca apoderarse de sus territorios para mercantilizarlos; y no menos importante, un *referente* organizativo para la sociedad, más allá del mundo indígena, en la construcción de alternativas que posibiliten una convivencia societal con preceptos distintos a los de las civilizaciones capitalistas.

Las autonomías... son procesos de resistencia mediante los cuales pueblos o etnias soterradas y negadas recuperan o fortalecen su identidad, a través de la reivindicación de su cultura, el ejercicio de los derechos colectivos y el establecimiento de estructuras político-administrativas con diversas competencias, ámbitos o niveles de aplicación y una base material propia.

...

posibilitan a grupos autodeterminados desarrollar y promover formas tradicionales de convivencia política con otros actores de las sociedades nacionales y una relación armónica con la naturaleza. En ese sentido, en la medida en que la conformación del sujeto autónomo conlleve transformaciones democratizadoras en su interior, el



movimiento autonómico fortalece su representatividad y consenso. (López y Rivas, 2005a, pp. 33-34)

Bajo esta lógica de resistencia anticapitalista (antisistémica) y de generación de nuevas formas de convivencia política al interior de los pueblos indígenas como con otros actores sociales, es que se han conducido las comunidades zapatistas. Los distintos informes¹ presentados por el zapatismo –a lo largo de 15 años– sobre su experiencia autonómica, dan cuenta de los avances, dificultades y problemas que han enfrentado en el desarrollo de la autonomía, así como de los ámbitos, competencias (áreas de trabajo) y elementos comunes, que sirven como base para su construcción.

Construcción de la autonomía zapatista: Organización territorial y organización política

La decisión política del zapatismo de avanzar en la construcción de su autonomía – ante el rechazo del Estado mexicano a los Acuerdos de San Andrés– implicó la reorganización del proceso autonómico que comenzó en diciembre de 1994 con la conformación de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Dicha reorganización implicó la desaparición de los *Aguascalientes* como espacios de encuentro y diálogo del zapatismo con la sociedad civil, la ruptura con la visión y práctica paternalista de sectores sociales vinculados al proceso autonómico, y el surgimiento de los *Caracoles* y las *Juntas de Buen Gobierno* (JBG).

La creación de las *JBG* –como espacios políticos del autogobierno– significó el establecimiento de nuevas formas organizativas, además de corregir –lo que ellos han llamado– el *desarrollo desequilibrado de la autonomía*, y delimitar con mayor claridad el ámbito de acción de la estructura político-militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el de la estructura político-civil del autogobierno de las comunidades. Bajo estas medidas se inició una nueva etapa en el proceso de construcción de la autonomía zapatista: tomar en sus propias manos el control y conducción de su destino, al actuar como sujeto político con capacidad de decidir de manera colectiva sobre su presente y futuro en una ruta no convencional.

Organización Territorial

La construcción de la autonomía como proyecto liberador precisa –además de la decisión y voluntad organizativa de los pueblos, de la participación y solidaridad de la sociedad civil– de un territorio donde pueda materializarse. Sin ello, es prácticamente imposible. La propiedad de la tierra es fundamental para el desarrollo del proceso



autonómico, si bien en sí misma no resuelve todos los problemas del conjunto social comunitario, sin la propiedad –arraigo territorial– no se resuelve ninguno de ellos.

La insurrección del primero de enero de 1994, permitió la recuperación y apropiación por parte de las comunidades zapatistas de la tierra como medio para producir y base de la construcción autonómica. Se obtuvo el control de un territorio en el que se reconfiguran las relaciones sociales, políticas, jurídicas, culturales y económicas, generando un cambio de la vida social en su conjunto. Se sentaron las bases materiales para la arquitectura de una sociedad diferente, bajo el establecimiento de relaciones sociales distintas a las capitalistas: sin relaciones de explotación, dominación y no guiadas por la lógica del dinero.

Se concibió la recuperación de la tierra no sólo desde una visión economicista de la apropiación de los medios de producción, sino como algo mucho más amplio, la madre tierra –dicen ellos–, con un significado y cosmovisión integral de la vida y el territorio. Zibechi (2008, p. 29) sostiene que “El territorio es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, instituyendo su espacio, apropiándose material y simbólicamente”

La autonomía zapatista –hasta antes del 17 de agosto de 2019– contaba con una organización territorial conformada por cinco Zonas. Cada una de ellas compuesta por un sin número de comunidades y/o localidades de diferentes pueblos indígenas articulados bajo los llamados municipios autónomos –que en sí ya representaban una reconfiguración geográfica–, además de algunas regiones que no estaban constituidas aún como MAREZ por su nivel de organización. Toda Zona contenía una sede, los llamados Caracoles zapatistas que sirven como espacios de encuentro político-cultural entre las comunidades, como con la sociedad civil; y en la que se ubican las JBG, resultado de la agrupación o coordinación entre municipios autónomos.

Desde la concreción de las JBG en agosto de 2003, las comunidades zapatistas han reorganizado y transformado sus municipios autónomos según las condiciones y necesidades que el proceso autonómico ha requerido. Por ejemplo, la creación de treinta y dos municipios autónomos rebeldes el 19 de diciembre de 1994, no corresponde con los cerca de cuarenta municipios que había en el 2003, y tampoco con los veintisiete municipios autónomos que existían hasta 2013, según lo informado en la Escuelita Zapatista.² La disminución de municipios autónomos no significó una reducción del territorio en resistencia, o de los pueblos y comunidades que lo conforman, sino que obedeció a razones de fortalecimiento. Según lo señalado por los propios



zapatistas, hasta el año 2013, el proceso autonómico había crecido cuantitativamente y cualitativamente; la geografía zapatista se había extendido a zonas urbanas del Estado de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, entre otros) y alcanzado parte del territorio del estado de Tabasco. Al respecto, López y Rivas sostiene “que con la iniciativa de las Juntas de Buen Gobierno instaladas en los cinco *caracoles*, la influencia zapatista abarca más de la mitad del territorio chiapaneco” (López y Rivas, 2005b, p. 72).

El 17 agosto de 2019, el EZLN comunicó –en un contexto de creciente militarización y de campañas de contrainsurgencia auspiciadas por la política de la Cuarta Transformación– “la ruptura del cerco”, una nueva expansión territorial que se traduce en la adición de otros siete Caracoles con sus respectivas JBG, cuatro MAREZ y de otra estructura organizativa, en pleno proceso de construcción, llamada Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CCRI-EZLN, 17/08/2019). Queda esperar cómo se reconfiguran las Zonas. La ampliación obedece, fundamentalmente, al trabajo organizativo realizado por mujeres y jóvenes que han nacido y crecido como lo que López y Rivas (2019) llama “sujetos autónomos concientizados, politizados y motivados en el mandar obedeciendo”.

El mismo autor observa que las autonomías territorialmente se pueden expresar como intrarregionales, regionales, municipales y comunales; y para el caso de América Latina, sostiene que, salvo las intrarregionales, se han expresado con reivindicaciones monoétnicas o pluriétnicas (López y Rivas, 2005a, pp. 35-36). Siguiendo esta conceptualización, el zapatismo se ubica como un proceso autonómico pluriétnico, con tres niveles organizativos –hasta este momento– dentro de su estructura territorial y de autogobierno:

- Nivel Local. Se refiere a cada comunidad con sus respectivas autoridades: Agentes y comisariados con sus comités.
- Nivel Municipal. Se refiere a los MAREZ y sus autoridades: Consejos Autónomos Municipales, Consejos de Vigilancia y autoridades regionales para aquellos lugares que no pertenecen a algún municipio autónomo.
- Nivel Zona. Integrado por las JBG –con su Consejo y una Comisión de Vigilancia– conformadas por la coordinación de los MAREZ y los Caracoles como espacios de encuentro y sedes de las JBG.



Este despliegue organizativo, basado en los siete principios del mandar obedeciendo – Proponer y no imponer; Convencer y no vencer; Bajar y no subir; Servir y no servirse; Construir y no destruir; Representar y no suplantar; Incluir y no excluir–, convierte a esta experiencia autonómica en una de las más desarrolladas, por su complejidad y profundidad, de América Latina.

Organización política

La autodeterminación política en la práctica zapatista se visibiliza con el establecimiento de gobiernos propios, en el espíritu de que sean los pueblos y comunidades los que decidan sobre su base económica, la administración de la justicia, el control interno del territorio (leyes, reglamentos, normas), la definición de su propio régimen agrario, propuestas de trabajo para el fortalecimiento de la autonomía y la búsqueda de soluciones a problemas y conflictos internos entre zapatistas y no zapatistas.

Se trata de instancias colectivas de gobierno –no homogéneas– integradas por miembros de las comunidades que prestan un servicio por determinado tiempo como autoridad sin recibir un salario a cambio; reciben apoyo de su comunidad realizando las labores que le permiten su sustento y de su familia –el trabajo de su parcela–, para que puedan atender de tiempo completo el turno que les toca estar como integrantes del Consejo Autónomo de la JGB.

En los gobiernos autónomos no encontramos esa distancia que por su dominio y disfrute de privilegios hace ajenos del resto de la población a los gobernantes; tampoco hay una “división de poderes” entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial; ni una distribución de responsabilidades en función de conocimientos parciales, supuestamente separados por especialidades (Fernández, 15/02/2015).

Las autoridades de las JBG son electas para ocupar el cargo por 3 años en las diferentes Zonas, pero sus integrantes cambian en diferentes momentos; cada año hay nuevos miembros en las *Juntas*. En los municipios autónomos, las autoridades igualmente se sustituyen parcialmente, a unos les toca un año, y a otros al siguiente. Ese procedimiento garantiza que siempre haya integrantes con experiencia en la función, que transmitan el ejercicio de gobernar a quienes vayan a cumplir con ese encargo por primera vez, y den seguimiento a los trabajos de dicha instancia. El número de los que componen las JBG –así como de la cantidad de MAREZ de los que provienen– no es el mismo para todos los casos, ni tampoco la periodicidad de los turnos en que organizan para su funcionamiento. De acuerdo con el cuaderno *Gobierno Autónomo I* (EZLN, 2013):



- La JBG del Caracol I (Zona Selva Fronteriza) tenía 24 integrantes, organizados en dos turnos de rotación de cada 15 días. En la asamblea de Zona se decidía a qué pueblos y representantes les tocaba asumir el cargo.
- La JBG del Caracol II (Zona Altos) se conformaba por 14 hombres y 14 mujeres, que provenían de la elección del Consejo Autónomo de cada municipio. Su rotación era semanal y se coordinaban en 3 turnos.
- La JBG del Caracol III (Zona Selva-Tzeltal) contaba con 24 elementos, divididos en 3 turnos que rotaban cada 10 días. Anteriormente, sus integrantes eran los mismos de los Consejos Municipales, que sólo asumían el cargo en la JBG durante los días que les tocaba su turno, después eran elegidos por separado en las asambleas por Zona.
- La JBG del Caracol IV (Zona Ztots-Choj) se componía por 60 personas, repartidas en 5 turnos que rotaban cada semana.
- De la JBG del Caracol V (Zona Norte) sólo sabemos que había 6 personas por turno, pero no el número total, ni la periodicidad de la rotación.

En todos los niveles del autogobierno existen comisiones de vigilancia conformadas en algunos casos sólo por bases de apoyo —habitantes de las comunidades—, en otros, se incorpora también la comandancia del EZLN. La función de ellas es velar el cumplimiento del mandato del pueblo por parte de las autoridades, de no darse, informan a la asamblea general correspondiente para que ella decida si hay sólo una llamada de atención o hay cambio de integrantes: revocación de mandato. Es la comunidad el actor colectivo que ejerce el poder político mediante una concepción de la democracia que abarca distintos ámbitos del quehacer cotidiano:

La idea de gobierno autónomo que se tiene en los pueblos zapatistas supone una vida comunitaria en la que la democracia no sólo se refiere a elección de autoridades que son gobierno, sino que es un ejercicio permanente vinculado a la práctica cotidiana de los responsables de todos los cargos que la comunidad necesita para organizarse, para producir y reproducirse como pueblos indígenas, como seres humanos.

Complementariamente al ejercicio de la autonomía, estas mismas comunidades conciben la democracia como un derecho del cual se deriva la posibilidad de defender otros derechos y con ellos exigir a las autoridades que trabajen buscando el bienestar colectivo en todos los aspectos de la vida comunitaria, incluido el cuidado de la naturaleza: "...buscar el bienestar en lo social, económico, político, y cultural, y



comprometiendo a cuidar el medio ambiente, los recursos naturales, y trabajando juntamente...” (Fernández, 15/02/2015).

A través del *mandar obedeciendo* se construye otra lógica política que revoluciona, según Aguirre Rojas, la función del mando, quitando el carácter despótico, autoritario, de la política tradicional para convertirla en una función de instrumentalización y puesta en práctica de decisiones colectivas:

el “Mandar obedeciendo” no implica tanto una inversión simétrica de funciones, donde quien antes mandaba ahora obedecerá y donde quien obedecía ahora mandará – poniendo así a la mayoría en el antiguo lugar de la minoría y viceversa–, sino más bien y mucho más profundamente una revolución completa del modo mismo de concebir primero la función del mando, después la función de la obediencia y por último la relación entre ambas. Porque si ahora el pueblo, la inmensa mayoría, la población en su conjunto... “manda”, y el gobierno, la minoría, el pequeño grupo, tiene que “obedecer”, eso no significa que ahora la mayoría decide, delibera, dirige y dispone autoritaria y despóticamente, mientras un pequeño y reducido grupo ejecuta, acata, asume y sigue directrices prefijadas en forma pasiva y sumisa. Significa en verdad que el pueblo, la mayoría “manda” sobre sí misma, por intermedio de un pequeño grupo que operacionaliza y da curso práctico a los mandatos colectivos y mayoritarios de los grupos y clases subalternos del pueblo (2008, p. 29).

Así, los principios del mandar obedeciendo, y la ética política que de ellos emana, han sido fundamentales en el desarrollo del sujeto autonómico, pues apuntan a una práctica con una vocación de servicio –que antepone los intereses colectivos sobre los intereses individuales–, de búsqueda de acuerdos y consensos –a través del diálogo– como bases de otra forma de hacer política que se materializa en la autonomía política, en estructuras política-administrativas propias de las comunidades en resistencia y rebeldía: la construcción del autogobierno.

Prácticas de la democracia

Los representantes a los Consejos Autónomos y de las JBG, como la autoridad local, son elegidos democráticamente en asambleas comunitarias de los pueblos, en las que participan todos aquellos mayores de 12 años de edad de forma directa. Hasta la edad de 15 años, los habitantes tienen el derecho a voz, a partir de los 16 también pueden votar (Fernández, 2014). Las propuestas hechas en esos espacios colectivos se llevan a las asambleas municipales donde se juntan todos los pueblos para elegir al Consejo Municipal, y para el caso de JBG se lleva a la asamblea de Zona. Existe el acuerdo



dentro del proceso autonómico de que deben buscar ser la misma cantidad de hombres y mujeres en el ejercicio del gobierno.

Las autoridades autónomas responden, como arriba fue señalado, al mandato de los pueblos, es decir, no son independientes en su ejercicio, son representantes populares cumpliendo con las ordenanzas comunitarias, mediante un mecanismo de rotatividad en la representación. Las comunidades en el momento que consideran que un integrante o el consejo del gobierno colectivo incumplen con sus funciones, o fallan a los 7 principios del mandar obedeciendo como guía de su práctica, pueden sustituirlos mediante la revocación del mandato de forma inmediata.

El mecanismo de consulta para llevar a cabo la discusión, análisis y toma de decisiones de las propuestas hechas por las JBG a los pueblos es como sigue: las propuestas son enviadas a los MAREZ, de éstos a las autoridades locales para que sean revisadas en las asambleas comunitarias por las bases de apoyo zapatistas (BAZ),³ y regresen con la decisión de los pueblos. Si hubiera pueblos que no estuvieran de acuerdo, el diálogo continúa hasta obtener un consenso, y a partir de ahí las autoridades ejecutan el mandato. En el caso de que las propuestas emanaran de las BAZ, los municipios autónomos junto con la JBG las analizan para autorizarlas o enviarlas a consulta a los demás pueblos, según sea el caso del que se trate.

Nada se decide sin ser consultado previamente.⁴ Se trata de un ejercicio de democracia directa, participativa, que va más allá de elegir autoridades. En otras palabras, las asambleas como instancia de decisión, eliminan la posibilidad delegativa – representativa– de la democracia, devuelven al pueblo su facultad de deliberar sobre asuntos públicos y de interés común, reduciendo el papel de los integrantes de los tres niveles de gobierno al de ejecutores de la voluntad e interés popular. López y Rivas sobre este aspecto del ejercicio del mandar obedeciendo afirma lo siguiente:

Es una forma diametralmente opuesta al vanguardismo, al burocratismo, a la conformación de castas que hacen del poder gubernamental y la representación popular su modus vivendi y que han devenido maquinarias partidistas electorales que a toda costa pretenden el cargo público para su propio beneficio y enquistarse en una clase política divorciada del pueblo. (2014, pp. 67-68)

En ese sentido, es evidente que el EZLN no devino en vanguardia o nuevo sector gobernante: no suplantó, no buscó, ni busca el poder para sí. En el proceso autonómico zapatista es el pueblo el que gobierna –sustentado en un proceso de aprendizaje otorgado por el nombramiento y la rotatividad en los cargos–. En dicho proceso no hay



separación entre gobernantes y gobernados, el ejercicio de gobernar no es tarea de especialistas, y es la población en su conjunto quien toma el quehacer de la política; de tal forma que en su experiencia no sólo cambió las relaciones sociales de producción, atacó otra parte importante, las relaciones de dominación política. Es el *pueblo hecho poder* y no el poder para el pueblo.

A manera de cierre

El proyecto autonómico zapatista es un proceso que tiene tiempos y ritmos diferentes en cada Zona, de acuerdo a los problemas y necesidades particulares que se atienden respetando la complejidad de las diferencias socio-culturales del sujeto autonómico. No obstante, hay convergencias más grandes. En todo el territorio zapatista se mantienen relaciones sociales no capitalistas, no es la lógica del dinero la que determina que alguien pueda tener casa, salud, trabajo, educación, justicia, etc. Dichas demandas son satisfechas por el trabajo de las comunidades bajo relaciones de cooperación y solidaridad. La autonomía expresada en los diferentes niveles del autogobierno – guiados por los 7 principios del mandar obedeciendo–, garantiza la subsistencia precisamente apoyada en esa economía solidaria y el territorio que la sustenta.

La posesión de la tierra y el control de un territorio en el cual el trabajo productivo está organizado colectivamente para tener una autosuficiencia económica que sustente la independencia política respecto de los gobiernos oficiales, son bases sobre las que se ha construido la autonomía zapatista. Sin estas bases resulta difícil imaginar algún proyecto de gobierno autónomo que pudiera prosperar. (Fernández, 2014, p. 105)

La autonomía zapatista se concreta, entonces, a partir de dos hechos fundamentales: “el cambio en la propiedad de los medios de producción, y... la toma y ejecución de... decisiones [propias], la política” (SubGaleano, 2015, p. 263). La economía y la política son dos elementos fundamentales que se fusionan en la práctica del sujeto autonómico en la búsqueda de su libertad. Este hecho distingue al ejercicio zapatista de otras experiencias emancipadoras que se apropiaron de los medios de producción, poniéndolos al servicio y para beneficio del pueblo, pero expropiándolo de la posibilidad de tomar y ejecutar sus propias decisiones; quedando éste despojado de la política y subordinado a un sector “ilustrado” que dispone por él: las estructuras partidarias o las vanguardias. Tal vez, la vivencia práctica a la que más se aproxime, incluso ya la haya rebasado por sus logros, sea a la Comuna de París.

En el quehacer autonómico zapatista no existe una burocracia civil, ni militar que domine o suplante a la población, es ella misma quien se autogobierna; existe sí un ejército,



pero que está separado de las funciones de la administración de los asuntos públicos y civiles, cumple funciones de acompañamiento y vigilancia del proceso autonómico, además de estar bajo el mando de estructuras político-civiles al servicio de los pueblos. Por otra parte, los integrantes del gobierno autónomo al no recibir ningún sueldo por sus funciones, asumen su trabajo como un servicio a la comunidad, aspecto que elimina la lucha por esos puestos como ocurre en la política tradicional. Este mecanismo evita que las autoridades se distancien del pueblo, no da ventajas económicas para quien ejerce el cargo, además de estar sujeto a la rendición de cuentas y a la supervisión permanente, procurando evitar el surgimiento de prácticas de corrupción y, en caso que se presenten, se combaten con acciones de rotatividad y revocabilidad.

Se trata de una experiencia dotada de principios éticos que reafirman el carácter anticapitalista de la lucha; y es en esa tónica que se encuentran las JBG y los Caracoles. Se asoma la construcción de un *mundo otro*, integrador y transformador de la realidad social; expresamente señalado, además, en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona surgida en Junio de 2005 y las distintas iniciativas que se han enmarcado en ella durante los últimos 12 años. Lo novedoso del proceso es brillantemente resumido por López y Rivas (López y Rivas, 30/06/2008):

Cuando los zapatistas... trascienden el autogobierno y lo asumen a partir de los principios de mandar obedeciendo, la rotación de los cargos de autoridad, la revocación del mandato, la participación planeada y programada de mujeres y jóvenes, la reorganización equitativa y sustentable de la economía, la adopción de una identidad política anticapitalista y antisistémica y la búsqueda de alianzas nacionales e internacionales afines a ésta, se lleva a cabo un cambio cualitativo de las autonomías, a la par que se transforman los propios pueblos indígenas en sus relaciones de género y grupos de edad, en sus procesos de identidad política, étnica y nacional, en su apropiación regional del territorio y la extensión del poder desde abajo.

La formación y el fortalecimiento del sujeto autonómico pasan también por la ruptura con las viejas formas de las políticas indigenistas que durante muchos años puso en práctica el Estado para mantener el control de los pueblos y las comunidades indígenas por medio del paternalismo y el clientelismo. El movimiento indígena independiente del Estado revela que indigenismo y autonomía son conceptos antitéticos.

En síntesis, aunque aquí se aborda el ámbito político, el proceso autonómico tiene un carácter integral –y genuinamente independiente de las estructuras estatales–. Abarca distintos aspectos del tejido social en la intención de atender y mejorar las condiciones



de vida de la población, en un entorno que trasciende el bienestar material, pues ha logrado promover el ejercicio del poder político desde abajo y, por ende, el autogobierno.

Notas

¹ El primer informe presentado fue a un año de la formación de las JBG y los Caracoles, en un texto llamado “Leer un video”. Los siguientes informes se presentaron entre 2006 y 2007 en los tres Encuentros de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo. Otro informe fue presentado en 2013-2014 en el marco de la Escuelita Zapatista: la libertad según los zapatistas, que contempla 4 libros y 2 videos donde plasman su experiencia. Y finalmente, la última información se presentó en agosto de 2019 en el comunicado “Y rompimos el cerco”.

² La distribución se daba como sigue: la Zona Selva Fronteriza cuenta con 4 municipios autónomos; la Zona Tzots Choj, tiene 3 municipios autónomos, que por las condiciones geográficas están divididos en varias regiones; la Zona Selva Tzeltal contiene 4 municipios autónomos; la Zona Norte da cuenta de 9 municipios y dos regiones con dos sedes (el Caracol y la comunidad de Acabalná), y; Zona Altos, que cuenta con 7 municipios autónomos.

³ Así se les denomina a los integrantes de las comunidades que forman parte del proceso autonómico y de la estructura organizativa que tiene el carácter civil. Hay que recordar que dentro del zapatismo hay tres tipos de integrantes: los insurgentes (con carácter militar), los milicianos (que reciben entrenamiento militar, pero viven y trabajan en las comunidades) y las bases de apoyo zapatistas.

⁴ Se han presentado casos, narrados en los libros de la Escuelita Zapatista, en que no se ha consultado principalmente por parte de los Consejos Municipales y han sido sustituidos por otros miembros y castigados (desde que tienen que reembolsar lo que gastaron sin consultar, trabajo comunitario, hasta no recibir beneficio de proyectos productivos).

Referencias

Aguirre Rojas, C. (2008). *Mandar obedeciendo. Lecciones políticas del neozapatismo mexicano*.

Colombia: Ediciones desde abajo.

CCRI-EZLN. (17/08/2019). Y rompimos el cerco. Recuperado desde <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/08/17/comunicado-del-ccri-cg-del-ezln-y-rompimos-el-cerco-subcomandante-insurgente-moises/>



EZLN. (2013). *Gobierno Autónomo I. Cuaderno de texto de primer grado del curso “La Libertad según l@s Zapatistas” de la Escuelita Zapatista*. México.

Fernández, P. (15/02/2015). Gobierno Autónomo Zapatista. Características antisistema político mexicano. Recuperado desde <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2010/02/15/gobierno-autonomo-zapatista-caracteristicas-antisistema-politico-mexicano/>

Fernández, P. (2014). *Justicia Autónoma Zapatista Zona Selva Tzeltal* (E. Autóno@s Ed.). México. Hernández, L., Vera, R., & (Comp.). (2004). *Acuerdos de San Andrés* (2da. reimp. ed.). México: ERA. Hernández Navarro, L. (2004). Serpientes y escaleras: los avatares de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. En L. Hernández Navarro y R. Vera Herrera (Eds.), *Acuerdos de San Andrés*. México: ERA.

López y Rivas, G. (30/06/2008). Por los caminos de la autonomía: algo más que autogobiernos. Recuperado desde <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69589&titular=por-los-caminos-de-la-autonom%EDA:-algo-m%E1s-que-autogobiernos->

López y Rivas, G. (2005a). Introducción. Algunos referentes teóricos. En L. Gabriel y G. López y Rivas (Eds.), *Autonomías indígenas en América Latina: Nuevas formas de convivencia política*. México: Ludwig Botzmann Institut/Latautonomy/Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I)/Plaza y Valdés.

López y Rivas, G. (2005b). México: las autonomías de los pueblos indios en el ámbito nacional. En L. Gabriel y G. López y Rivas (Eds.), *Autonomías indígenas en América Latina; Nuevas formas de convivencia política*. México: Ludwig Botzmann Institut/Latautonomy/Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I)/Plaza y Valdés

López y Rivas, G. (2014). *Autonomía de los pueblos indios y zapatismo en México*. México: Ocean Sur.

López y Rivas, G. (2019). ¡Rompieron el cerco y extendieron su territorio autonómico!, Opinión. *La Jornada*. Recuperado desde <https://www.jornada.com.mx/2019/09/13/opinion/020a2pol>

SubGaleano. (2015). Etcétera *Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista I*. México.

Zibechi, R. (2008). *Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento*. México: Bajo Tierra Ediciones.



Actores sociales y acción organizada en un escenario neoliberal. El caso de los emprendedores sociales en Medellín (Colombia).

John Fernando Macías Prada¹

Resumen

En esta ponencia se explora teóricamente un fenómeno llamado “emprendimiento social”. Éste consiste en la creación de empresas económicas por parte unos actores sociales cuyas características no se alinean con el mundo tradicional de los negocios (búsqueda de rentabilidad financiera, crecimiento económico, optimización de recursos y eficiencia de costos y oportunidades) sino que se orientan por valores como solidaridad, fraternidad, cooperación, dignidad y justicia. Se conjetura que estos emprendedores ilustran a un nuevo tipo de actor social que se resiste, muta y desafía a las lógicas neoliberales que hoy en día predominan en nuestros países. En particular, se plantea una reflexión a partir del estudio de los emprendedores sociales que han consolidado sus actividades en la ciudad de Medellín (Colombia) y desde la teoría sociológica de movimientos sociales de Alain Touraine, ajustada al estudio de los sujetos sociales contemporáneos.

Palabras clave

Nuevos actores sociales; Neoliberalismo; Emprendedores sociales; Alain Touraine; Medellín (Colombia).

Introducción

Medellín (Colombia) se ha caracterizado en años recientes por la implementación de un proyecto neoliberal de transformación social, política y empresarial basado en el fortalecimiento del mercado y el desarrollo económico como baluarte del bienestar general (Ocampo, 2017). No obstante, se han generado focos de resistencia al embate de esa lógica neoliberal y los emprendedores sociales han emergido como actores que proponen procesos de organización alternativos (Arboleda & Zabala, 2011).

Los ‘emprendedores sociales’ son personas que buscan resolver necesidades sociales a partir de una oportunidad de negocio (Alvord, Brown & Letts, 2004). Entre sus características se encuentra su alto compromiso con causas sociales y su disposición a realizar acciones para mejorar el bienestar de sus comunidades. Son actores que “creen” en el mercado, pero también lo critican y buscan alternativas para la



construcción de la vida bajo principios de solidaridad, cooperación, dignidad y justicia (Mair, Robinson & Hockerts, 2006; Melo, 2016).

A partir de un balance teórico fundado la obra sociológica de Alain Touraine (1969, 1995, 2005, 2016), en esta ponencia se plantea que algunos emprendedores sociales en Medellín podrían estar generando acciones que se resisten a las políticas y prácticas que reproducen el modelo de sociedad neoliberal. De allí que se aquí se propone un análisis de los elementos teóricos de las posibilidades y limitaciones que tienen ellos para constituirse, en escenarios como la ciudad de Medellín, en actores sociales que producen acciones de organización y de gestión orientadas por valores sociales que desafían las lógicas dominantes del mercado. Todo ello permite sugerir la consolidación de un nuevo tipo de actor social contemporáneo, cuyas dinámicas y repertorios de acción resisten, hibridan o desafían al modelo de sociedad que materializa el neoliberalismo.

Fundamentación del problema

Diversos puntos de vista asumen que el fenómeno llamado ‘emprendimiento’ es una actividad que consiste en la creación de empresas para contribuir al desarrollo de los territorios mediante la dinamización de los mercados, el mejoramiento del tejido empresarial y de las condiciones de vida de las personas cercanas a sus radios de influencia (Reis, 1999; Bosma, Schøtt, Terjesen & Kew, 2015). De este modo, este fenómeno se ha sido visto como un tema esencial en los campos económicos y administrativos. No obstante, en los últimos años han aparecido en todo el mundo tantas y tan diversas experiencias de creación de empresas (Bosma et al., 2015) que la realidad misma del fenómeno ha llevado a que se haya comenzado a estudiar el emprendimiento ya no solo como un asunto económico sino, también, desde nuevas perspectivas. Allí las ciencias sociales se han abierto al fenómeno para verlo como un asunto también antropológico, sociológico y organizacional (Maír & Martí, 2006).

Asociado con el emprendimiento (creación de empresas económicas) de forma reciente se ha acuñado la expresión ‘emprendimiento social’ para hacer referencia al conjunto de iniciativas que buscando (o no) el beneficio económico, tienen como principal propósito **no** la rentabilidad económica (como en el caso de los emprendimientos convencionales) sino lograr transformaciones de comunidades consideradas ‘vulnerables’ o en ‘desventaja’, así como buscar condiciones para el bienestar de los involucrados en dichas iniciativas (Dacin, Dacin & Matear, 2010).



El concepto de emprendimiento social ha aparecido difuso en la literatura académica, pero cada vez es menos desconocido. Es común que sea confundido con 'responsabilidad social', con las acciones de las ONG, con el 'activismo social' o con la provisión de servicios, por lo que parece que el concepto significa diferentes cosas para diferentes personas, investigadores e instituciones. Algunos autores lo asocian exclusivamente a organizaciones no lucrativas que ponen en marcha empresas con fines lucrativos o ingresos salariales; otros lo utilizan para describir a cualquiera que ponga en marcha una organización sin fines lucrativos, y hay quien se refiere a propietarios de empresas que integran la responsabilidad social en sus operaciones (Mair & Martí, 2016).

El común denominador de este tipo de iniciativas es que implican una movilización de recursos sociales, simbólicos y organizacionales que contienen el compromiso de resolver colaborativamente problemas sociales, con métodos empresariales, para conseguir resultados tangibles (de Bruin, Shaw & Lewis, 2017).

En consecuencia, puede decirse que existe, de una parte, un emprendimiento convencional o tradicional, el de creación de empresas con fines económicos y, de otra parte, el emprendimiento llamado 'social' que concreta en los territorios la búsqueda social de obtener bienestar a partir del quehacer empresarial. En otras palabras, la idea de 'emprendimiento social' alude a una práctica social que materializa el proceso por el cual el mundo de las empresas tradicionales se bifurca hacia nuevos linderos y propendiendo por deconstruir los objetivos de competencia y rentabilidad del mercado para producir una combinación con otros valores solidarios, o bien resignificando las prioridades en clave de bienestar social.

Vale enfatizar en que el emprendimiento social emerge primero como realidad concreta (miles y decenas de empresas con vocación social apareciendo en distintas geografías, desafiando el establecimiento de las empresas tradicionales y a los saberes clásicos de la economía y la administración) y luego se establece como 'subcampo' de estudio de diversas disciplinas de las ciencias sociales. Hoy existe un esfuerzo por entender cómo funcionan este tipo de iniciativas que hibridan el interés de actuar desde el mercado para atender problemas sociales y además interesa establecer cómo resuelven la tensión de sobrevivir al mercado, que puede ser salvaje y agreste, que exige competitividad, innovación y rentabilidad, pero al mismo tiempo ser fieles a su vocación social de generar bienestar a las comunidades.



El fenómeno del emprendimiento social revela la presencia de unos actores sociales singulares, los emprendedores sociales. Ellos se caracterizan por liderar los procesos de organización y gestión de iniciativas para resolver problemas sociales, ambientales, culturales y políticos. Además, movilizan recursos tangibles e intangibles, y agencian alianzas con instituciones, comunidades y empresas para llevar a cabo actividades que propenden por el bienestar de sí mismos y de grupos poblaciones generalmente considerados vulnerables.

En términos sociológicos estos actores son los protagonistas de la materialización del emprendimiento social, pero también son un tipo de actor social paradójico en tanto se orientan por valores altruistas como la dignificación de las personas, la solidaridad y fraternidad, pero al mismo tiempo ubican sus acciones y posibilidades en el campo concreto de los negocios, en el cual persiste una lógica de competitividad, eficiencia, optimización y, en últimas, una priorización de la rentabilidad económica (Aktouf, 2009). Entonces, parece pertinente comprender a estos actores sociales en escenarios en los que la orientación hacia los negocios, el mercado y la búsqueda del desarrollo social basado en el crecimiento económico es la prioridad. ¿Los emprendedores sociales son actores que resisten el embate de la racionalidad hegemónica del mercado tradicional, o más bien se alinean con dicha racionalidad? Para explorar este asunto parece pertinente trasladar la cuestión a uno de los escenarios en los que esa racionalidad, que se puede denominar neoliberal, ha tenido una fuerte presencia en los años recientes.

Aquí se entiende que el neoliberalismo cristaliza un proyecto y una opción económica, política, cultural, ambiental y tecnológica consistente la intención de promover los principios del libre mercado como doctrina fundamental que dé continuidad histórica al modelo de producción capitalista en su acepción neoliberal (Sterger & Roy, 2011).

Medellín es la segunda ciudad en tamaño poblacional y en participación económica en Colombia. Esta ciudad se ha consolidado en las últimas décadas como un escenario en el que la racionalidad neoliberal ha estado posicionando unos discursos de desarrollo económico que privilegian el mercado como entorno de la realización de la vida en comunidad, de formación de ciudadanos orientados hacia valores como la competitividad, la optimización de recursos y el gobierno empresarial, es decir, actores sociales que sean 'empresarios de sí' (Macías, 2012; Ocampo, 2017). Sin embargo, también ha sido escenario del surgimiento de emprendimientos sociales cuyos actores sociales podrían considerarse como generadores de prácticas que resisten a esa lógica



de mercado, con valores como la solidaridad, la fraternidad, la igualdad y el comunitarismo.

Esta ciudad se constituye, por lo tanto, en un escenario ideal para explorar las posibilidades de resistencia de los emprendedores sociales al embate neoliberal y para estudiar a estos actores sociales como movilizadores de unas particulares prácticas de resistencia a partir de sus características y orientaciones.

Metodología

Para la elaboración de este escrito se ha realizado una revisión de la literatura que describe las definiciones y contenidos de los conceptos de 'acción social', 'acción organizada' y 'actores sociales', haciendo énfasis en los aportes que realiza el autor francés Alain Touraine desde su sociología de los sujetos sociales. Por asuntos de extensión en el presente documento se omite la revisión de literatura sobre acción social, acción organizada y actores sociales.

Adicionalmente, este trabajo se fundamenta en las evidencias que arrojan 41 entrevistas realizadas entre los años 2015 a 2018 a un grupo de emprendedores sociales, expertos y funcionarios públicos de Medellín. Ya que se pueden encontrar diferentes modalidades de emprendedores sociales aquí se han priorizado aquellos cuyas iniciativas son de tipo comunitario, orientados por principios de asociatividad, autogestión y solidaridad.

A partir de estos elementos, el propósito es fundamentar una perspectiva sociológica que pueda dialogar críticamente con las posturas que estudian y describen el fenómeno del emprendimiento social, pero, esencialmente, se busca describir desde la experiencia evidenciada en Medellín, la posibilidad de 'leer' este fenómeno como un escenario de emergencia de nuevos actores sociales que requieren seguir siendo estudiados por la sociología hoy.

Desde una perspectiva teórica se ha considerado que el marco conceptual desarrollado por Touraine permite recuperar sus aportes sobre movimientos y sujetos sociales para proponer una lectura contemporánea sobre 'nuevos actores sociales', entre los cuales los emprendedores sociales pueden considerarse un caso de estudio.

Evidencias y discusión

El carácter neoliberal de Medellín aparece en los planes de desarrollo de las administraciones locales, que han expresado un proyecto de ciudad que se cimienta en el mercado como baluarte del desarrollo y, por ello, presenta la necesidad de consolidar el tejido empresarial para dar sostenibilidad al proyecto de ciudad (Ocampo, 2017). Esto



se ve reflejado en la preponderancia dada en la ciudad a temas como la adaptación efectiva de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, a los nuevos requerimientos económicos y sociales globales instituidos como nuevos valores: competitividad, flexibilidad, innovación constante, desarrollo sustentable, incorporación tecnológica, autonomía técnica y científica, y liderazgo emprendedor. Asimismo, se ve reflejado en la estructuración de la administración municipal como 'conglomerado público' que convierte a Medellín en la primera ciudad de América Latina en ser manejada como una empresa (Periódico El Mundo, noviembre 11 de 2014).

A todo lo anterior se suma que en los últimos años las políticas públicas de desarrollo empresarial y social de la ciudad se han centrado en el fortalecimiento de un ecosistema de innovación social que pretende lograr una transformación social y urbana a través de la cultura y el mejoramiento del tejido empresarial. Estas políticas gozan del apoyo de diversas entidades, entre las que se encuentran los entes municipales de gobierno, empresas privadas, organizaciones sociales y universidades. Y aunque se trata de una propuesta loable, al mismo tiempo, parece reproducir una lógica modernista basada en la fe en el progreso y en el mercado capitalista neoliberal. Esto puede analizarse a luz de la obra de Dardot y Laval (2013), como un giro de la administración pública hacia una administración neoliberal que implica la búsqueda de maximizar la eficiencia y rentabilización de los recursos públicos mediante una programación y una coordinación gerencialista.

En este escenario la evidencia acumulada desde las entrevistas a emprendedores, expertos locales y funcionarios públicos de Medellín constatan la existencia en Medellín de variadas iniciativas organizacionales realizadas por emprendedores sociales, las cuales han intentado atender situaciones problemáticas realizando actividades empresariales, orientados por valores sociales como la solidaridad, la autonomía, la asociatividad y el sentido de pertenencia a la comunidad.

Por asuntos de espacio no es posible aquí detallar los testimonios y experiencias de estos actores sociales; baste con mencionar que sus iniciativas muestran que en la ciudad a la vez que la institucionalidad se ancla en la lógica neoliberal, también vienen dándose experiencias que se resisten a los embates de las lógicas de mercado y a las instituciones y organizaciones que las encarnan, y ellos actúan para gestionar estrategias de desarrollo más incluyentes, equitativas y sostenibles.

En efecto, las entrevistas realizadas muestran que los emprendedores sociales de carácter comunitario en Medellín cuestionan las lógicas y procedimientos por los cuales



el mundo de los negocios y las instituciones de gobierno de la ciudad se han regido en los últimos años, alejados de los temas más cruciales de amplios segmentos de la población: pobreza, seguridad, protección ambiental, entre otros. Se trata de una situación en que muchos de ellos expresan su voluntad de constituir iniciativas de organización que, estando todavía integradas a los sistemas tradicionales, pueden generar alternativas a algunas de las problemáticas de la sociedad.

Al respecto, se puede conjeturar que estos emprendedores sociales pueden potenciar la transformación de sentidos y orientaciones de las prácticas de mercado. En ese sentido, ellos son actores sociales que libran una doble lucha contra las fuerzas que quieren absorberlos. Por un lado, pesa sobre ellos la amenaza del poder de los mercados, de las tecnologías y de los grandes aparatos tecnócratas que controlan y manipulan al individuo, lo que puede implicar que sus actividades queden sumergidas en las lógicas de la racionalidad económica; por el otro, está el riesgo de quedarse encerrados en las fronteras de sus iniciativas empresariales y de discursos incautos, preocupados por resolver problemáticas sociales desde el mundo empresarial, con lógicas gerenciales tradicionales, pero sin llegar realmente a lograr transformaciones por hallarse embebidos en la racionalidad del lucro.

En este punto vale anotar, además, que no todos los individuos que se denominan emprendedores sociales poseen las mismas motivaciones y orientaciones de acción. De hecho, como lo señalan diversos autores (entre ellos, Zahra, Gedajlovic, Neubaum & Shulman, 2009) la diversidad de posturas sobre el emprendimiento social y las empresas sociales evidencian que el rol que estas personas pueden jugar en procesos de acción histórica puede ser de diversa naturaleza e, incluso, contradictorio entre los diferentes tipos. De allí que sea necesario distinguir los tipos emprendedores sociales realmente existentes, para el caso de esta ponencia solamente se tienen en cuenta los testimonios de aquellos que desarrollan iniciativas empresariales de tipo comunitario, orientados por principios de asociatividad, autogestión y solidaridad. Este perfil asegura a unos actores más cercanos a las posturas de actor social que plantea Touraine en su teoría.

Los emprendedores sociales entrevistados afirman que quieren resolver los vacíos que dejan los gobiernos locales (y en conexión con éstos, las políticas públicas), los mercados y el conjunto de organizaciones sociales y civiles. Con sus acciones evidencian la concreción factual de prácticas sociales alternativas que podrían



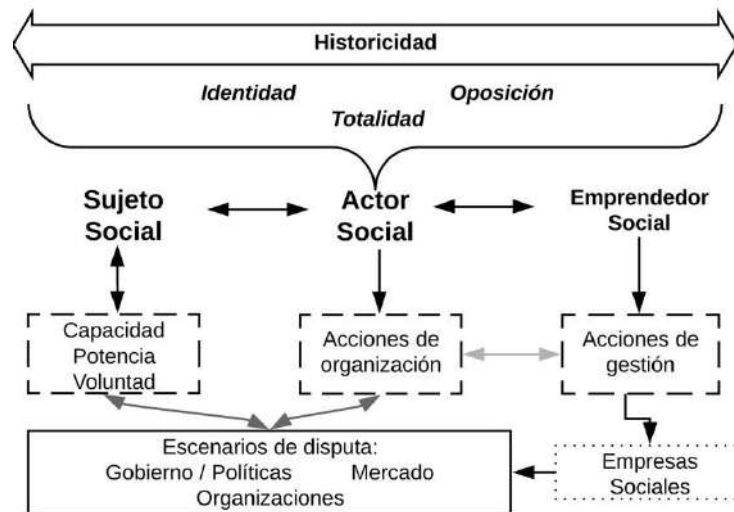
resignificar, por ejemplo, las prácticas gerenciales de las empresas tradicionales, adecuándolas a sus propios objetivos de resolver situaciones sociales problemáticas.

Desde un punto de vista teórico, pensar la acción social de este grupo de emprendedores sociales desde la perspectiva de Alain Touraine implica atender a las relaciones que estos pueden establecer para actuar en y desde los arreglos institucionales y organizacionales (gobiernos, políticas, mercados) en los vacíos que dichos arreglos dejan para llegar a convertirse en 'sujetos sociales'.

La categoría 'sujeto social' es empleada para explicar el giro de Touraine desde los movimientos sociales hacia el individuo que actúa sobre sus condiciones materiales produciendo oposición a los arreglos institucionales y organizacionales tradicionales (Touraine & Khosrokhavar, 2000). Se trata de una categoría que no describe ni a una realidad empírica ni a una realidad trascendental, sino que se refiere a las condiciones de posibilidad que tienen los actores sociales de luchar por su libertad y autonomía, en confrontación con cualquier intención de dominación o alienación (Touraine, 2005). Para el autor el estudio del sujeto social implica, entonces, observar y comprender las luchas para defender las libertades y los derechos, en la medida que se interactúa dialécticamente en sociedad (Dubet & Wieviorka, 1995)

De otro lado, Touraine describe tres principios de orientación que permiten explicar cómo el actor social puede devenir en sujeto social y cómo se relaciona con las diferentes dimensiones de su realidad social modificando las prácticas sociales; esos principios son: la identidad, la oposición y la totalidad.

En el esquema 1 y los siguientes párrafos se explora una posible aproximación a tales elementos en el caso de los emprendedores sociales de Medellín.



Esquema 1. Perspectiva teórica de Touraine aplicada a los emprendedores sociales
Fuente: elaboración propia a partir de los planteamientos de Touraine (1969; 1987; 1995)

Identidad. Según Touraine (1987) el principio de identidad se refiere a la definición del actor por él mismo, es decir, a la identificación de aquella situación o proceso conflictivo que constituye y lo organiza con la voluntad de transformación. En el escenario de la acción de los emprendedores sociales este principio se ilustra con el preponderante rechazo, muchas veces explícito, hacia el persistente racionalismo económico que determina al sujeto como depositario pasivo del orden económico contemporáneo; se trata de un rechazo justificado por el antecedente de los resultados incumplidos por los estados de bienestar y las ulteriores políticas neoliberales. Este tipo de identificación les permite compartir no solo una visión del mundo según la cual es posible actuar para mejorar las condiciones de vida las personas y la suya propia, sino también que les dota de la motivación para reconocer sus capacidades y recursos para implementar estrategias de cooperación y autogestión para el impulso de sus iniciativas.

Esta línea de aproximación teórica permite, entonces, ver a los emprendedores sociales como actores que resignifican su relación consigo mismos y que establecen prácticas que les permite tomar conciencia de sus derechos y actuar orientados por principios de colaboración, solidaridad y bienestar que los acerca tanto a ellos como a sus grupos a ser sujetos.

En el caso de la ciudad de Medellín, algunas de las experiencias evidenciadas han convergido en empresas sociales desde las cuales se alientan procesos de mejoramiento de la seguridad económica de personas de escasos recursos económicos (empleabilidad). Es el caso, por ejemplo, de empresas sociales comunitarias como El Fogón de Mamá Sara, una empresa de alimentos ubicada en la ciudad de Medellín, que



se dedica, entre otros, a combatir las condiciones de precariedad laboral de sus asociadas brindándoles condiciones de empleo adecuadas. Otras experiencias, incluso, alientan el mejoramiento de las prácticas del cuidado de niños y niñas en condición de pobreza extrema. A esto se dedica la empresa social Corporación Mujeres Unidas (CORPOMAUN), también ubicada en la ciudad de Medellín.

En estos casos los desafíos que convocan su identificación son, justamente, el reconocimiento de que en el sistema económico perviven situaciones de exclusión o injusticias que pueden ser contrarrestadas.

Oposición. Touraine afirma que una acción histórica sólo se organiza y concreta cuando se identifica el desafío que la orienta, aunque aclara que no necesariamente presupone esta identificación. No obstante, es el conflicto el que hace surgir dicho desafío o adversario y forma la conciencia de los actores involucrados en él. En consonancia con lo anterior, el autor francés señala que el principio de oposición abarca la capacidad del sujeto-actor para nombrar a su adversario, desafío u obstáculo.

En el caso de algunos grupos de emprendedores sociales su principal desafío puede hallarse, en primer término, en el reconocimiento de las condiciones disonantes del sistema neoliberal que, a su modo de ver, trae consigo condiciones que no son justas o que, en cualquier caso, les resultan problemáticas debido a su alejamiento de la producción de condiciones de bienestar. Así, para muchos de ellos el adversario está representado por la empresa tradicional y el sistema económico de cuño neoliberal que actualmente domina en el mundo occidental.

Para ilustrar estos asuntos vale la pena retomar algunas declaraciones de emprendedores sociales entrevistados en la ciudad de Medellín (Melo, 2016; Sánchez, 2016). Para ellos se hace necesario revisar la idea de que el mercado por sí mismo puede lograr una mejor asignación de los recursos y llevar al crecimiento y al bienestar generalizado; también, plantean que el capitalismo al estilo norteamericano con su preeminencia del mercado no es la única, ni la más eficiente forma de producir. Y afirman que los procesos suscitados por las políticas neoliberales han producido condiciones desastrosas, por ejemplo, altas tasas de desempleo, con lo que se pierden las prestaciones sociales vinculadas al empleo: seguridad social, vivienda, pensiones, salud, entre otros.

Podría entonces afirmarse que algunos emprendedores sociales se oponen a esas situaciones y a las instituciones y organizaciones que las encarnan, y deciden actuar



mediante la formación de iniciativas empresariales (empresas sociales) que les sirven para gestionar estrategias de desarrollo más incluyentes, equitativas y sostenibles (Melo, 2016), todo lo cual pasa por afrontar, también, el reto de actuar dialécticamente desde los propios escenarios económicos que buscan transformar.

Totalidad. De acuerdo con Touraine, las orientaciones comunes de los actores sociales sean adversarios o no, llevan al principio de totalidad; e ilustra este principio con el ejemplo clásico del movimiento obrero, cuyo adversario fue el empresario capitalista, con éste compartía el movimiento obrero los valores de la industrialización: la creencia en el progreso, la idea del "*one best way*" o la importancia de la producción y de la productividad. Los dos movimientos no oponían dos tipos totalmente distintos de sociedades, pero sí dos versiones conflictivas, opuestas, del mismo modelo industrial (Touraine, 1995).

Similarmente, en el escenario actual de predominio de la economía financiera (neoliberal) los emprendedores sociales no se oponen completamente al sistema económico, ya que su propuesta como actores, de hecho, es actuar desde el propio seno de ese sistema formando iniciativas empresariales. Sin embargo, ellos parecen emerger para oponerse a las políticas y prácticas que reproducen ese modelo de sociedad y reaccionan mediante sus actividades empresariales a la dificultad de desarrollar y afianzar sus valores éticos y sociales, que el mercado y la política no consolidaron.

Sin embargo, las instancias institucionales que encarnan ese modelo de sociedad (instituciones, gobiernos y empresas privadas), producen al mismo tiempo discursos que se consolidan en planes y proyectos, que comparten un nutrido grupo de preocupaciones que tienen los emprendedores sociales; esos discursos plantean atender las crisis desatadas por las promesas incumplidas en el modelo económico. Allí se ve que tanto éstos emprendedores como los marcos institucionalizados que reproducen el modelo de sociedad crean discursos que contienen orientaciones comunes sobre el tipo de sociedad deseada. Ejemplo de esto son las iniciativas privadas de filantropía empresarial o responsabilidad social empresarial, desde las cuales se intenta generar paliativos formales o informales para atender situaciones sociales problemáticas. Otras iniciativas están mediadas por la participación de políticas públicas institucionalizadas que buscan establecer las reglas del juego para construir iniciativas de 'negocios inclusivos', 'desarrollo sostenible', 'innovación social' y 'combate a la pobreza'.



Todas estas iniciativas terminan siendo, de una forma dialéctica, escenarios que reproducen el modelo económico imperante, pero, al mismo tiempo, son oportunidades de producción de nuevas situaciones sociales. De este modo, tanto los emprendedores sociales como los discursos enunciados por los gobiernos, empresas y organizaciones parecen apuntar hacia los mismos fines; pero a diferencia de la potencial reproducción del *status quo* que realizan los discursos institucionalizados, los emprendedores sociales son actores que se encuentran realizando de facto unas acciones organizadas en que priman orientaciones hacia el reconocimiento de los derechos, económicos, sociales, políticos y culturales de las personas, produciendo desde sus experiencias empresariales, prácticas que combaten la cosificación de los seres humanos, la preeminencia de la rentabilidad económica y que reconocen la libertad y la autonomía como principios importantes.

Reflexiones finales

La obra teórica de Alain Touraine no se ocupa del fenómeno del emprendimiento social ni ha concebido hasta ahora a los emprendedores sociales como actores sociales. No obstante, en su incesante búsqueda de expresiones empíricas que pueden materializar sus posturas en la época actual (ya que los movimientos sociales que estudió en el pasado han cambiado su naturaleza), los emprendedores sociales parecen un grupo de individuos que reúnen las condiciones de las que trata el autor cuando se refiere a la disputa por el control de la historicidad (dimensión histórica de la acción social que produce la sociedad).

Ciertamente, su acción no se concibe como un típico proceso de resistencia política o cultural ni contiene un propósito de transformación radical del conjunto de las instancias institucionales y organizacionales, sino que más bien se trata de una serie de relaciones que, en el proceso de producción de la sociedad, están incidiendo en la creación de sentidos dialécticos en las organizaciones empresariales. De allí que sea importante establecer cuáles son sus actividades y contextos específicos, como por ejemplo en el contexto de la ciudad de Medellín.

Los emprendedores sociales parecen estar constituyéndose como unos actores clave, que buscando actuar desde el mercado esperan orientar sus acciones por lógicas y formas de actuar que no son propias del mundo de los negocios, haciendo predominar en sus experiencias empresariales principios de asociatividad, autogestión y ayuda mutua que, por su propia naturaleza, riñen con los modos de gestionar y rentabilizar las empresas tradicionales. Son actores sociales paradójicos, que cimientan desde el



interior de la propia lógica neoliberal los elementos de su transformación mediante prácticas y racionalidades que resisten los valores del mercado.

En consecuencia, vale la pena echar una mirada a estos nuevos actores sociales que se vinculan, sin resistirse ni comprometerse con la lucha social, con acciones de cambio que ponen en vilo a las fuerzas del mercado que predominan en la cotidianidad de las personas en ciudades como Medellín. Lo que se ilustra de manera sucinta en esta ponencia es la evidencia de un proceso en que la construcción de realidades sociales desde procesos de organización no implica de forma explícita formas de lucha abierta y consciente, pero sí una voluntad y puesta en marcha de repertorios de acción que preservan la dignidad, que declaran la importancia de valorar lo humano y que promulgan la importancia de la fraternidad, la solidaridad y el bien común como principios irrenunciables.

La tarea que queda es continuar sumando elementos al estudio de estos actores sociales para descifrar las posibilidades y limitaciones de la acción organizada que les permite (o no) producir acciones de organización y gestión que resisten o se hibridan con la racionalidad neoliberal.

Notas

¹ Doctor en Estudios Organizaciones - Universidad Autónoma Metropolitana, México.
Doctor en Administración - Universidad EAFIT, Colombia. jmaciasp@eafit.edu.co

Referencias bibliográficas

- Aktouf, O. (2009). *La Administración: Entre tradición y renovación*. 4ta Ed. Cali: Univalle - Gaetan Morin.
- Alvord, S. H., Brown, L.D. & Letts, C.W. (2004). Social entrepreneurship and societal transformation. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 40(3), 260-282.
- Arboleda, O. L. & Zabala, H. (2011). Condiciones clave para el éxito y sostenibilidad de los emprendimientos solidarios en Medellín. *Semestre Económico*, 14(28), 77-94.
- Bosma, N.; Schøtt, T.; Terjesen, S. & Kew, P. (2015). *Special Topic Report Social Entrepreneurship*. London Business School - Babson College.
- Dacin, P. A., Dacin, M. T., & Matear, M. (2010). Social entrepreneurship: Why we don't need a new theory and how we move forward from here. *Academy of Management Perspectives*, 24(3), 37-58.
- Dardot, P., & Laval, C. (2013). *La Nueva Razón del Mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Barcelona: Gedisa.



De Bruin, A.; Shaw, E. & Lewis, K. (2017). The collaborative dynamic in social entrepreneurship. *Entrepreneurship & Regional Development*, 29:7-8, 575-585.

Dubet, F. & Wieviorka, M. (dirs.) (1995), *Penser le sujet. Autour d'Alain Touraine*, París, Fayard.

Macías, J. F. (2012). *Ciudadanos emprendedores en Medellín. La formación de ciudadanos orientados al mercado en un escenario neoliberal*. Investigación para obtener el título de Magister en Ciencias Políticas, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín.

Mair, J.; Robinson, J. & Hockerts, K. (Eds.) (2006). *Social Entrepreneurship*. New York: Palgrave Macmillan.

Mair, J. & Martí, I (2006). *Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight*. *Journal of World Business*, 41, 36-44.

Melo, J. (2016, 19 y 26 de agosto). *Entrevista de J.F. Macías [audio]*. [Coordinadora de la Empresa Social Innove]. Medellín.

Ocampo, C. (2017) *La contabilidad pública como tecnología de gubernamentalidad. Un análisis foucaultiano de la gestión del Municipio de Medellín (1990-2015)*. Doctorado en Administración, Tesis doctoral, Medellín: Universidad EAFIT.

Periódico El Mundo (noviembre 11 de 2014). *Un Gobierno corporativo y conglomerado público tendrá Medellín*. Sección Gobierno. Disponible en http://www.elmundo.com/portal/noticias/gobierno/un_gobierno_corporativo_y_conglomerado_publico_tendra_medellin.php

Reis, T. (1999). *Unleashing the New Resources and Entrepreneurship for the Common Good: A Scan, Synthesis and Scenario for Action*. W.K. Kellogg Foundation, Battle Creek, MI.

Sánchez, A. (2016, 24 de octubre). *Entrevista de J.F. Macías [audio]*. [Coordinadora de la Empresa Social de Alimentos El Fogón de Mamá Sara]. Medellín.

Sterger, M. B. & Roy, R. K. (2011). *Neoliberalismo, una breve introducción*. Madrid: Alianza Editorial.

Touraine, A. (1969) *La sociología de la acción*. Barcelona: Ariel.

_____ (1987). *El regreso del actor*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

_____ (1995) [1973], *Producción de la sociedad*, México, UNAM, IIS IFAL.

_____ (2005) *Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy*. Buenos Aires: Paidós.



_____ (2009). *La mirada social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI*. Barcelona: Paidós.

_____ (2016). *El fin de las sociedades*. México: Fondo de Cultura Económica.

Touraine, A. & Khosrokhavar, F. (2000) *A la búsqueda de sí mismo. Diálogo sobre el sujeto*. Barcelona. Paidós.

Zahra, S.A., Gedajlovic, E., Neubaum, D.O. & Shulman, J.M. (2009). *A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges*. *Journal of Business Venturing*, 24(5): 519-532.



Imágenes, Afiches y Banners.

Una mirada al uso de lo visual desde los colectivos de género en internet.

Carlos Andrés Martínez¹
Tania Meneses Cabrera²

Resumen

La presente ponencia hace parte de los avances de la investigación “Cibercultura y Resistencias en la Sociedad Digital. Una aproximación a las luchas de género en internet”, realizada por el grupo cibercultura y territorio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD – Colombia. Tiene como propósito indagar acerca de las formas de construcción de identidad en los colectivos de género en América Latina, a través del análisis de la información visual que crean, comparten y divulgan en internet.

Es de interés para la investigación, la caracterización de los procesos de resistencia y lucha social con enfoque de género a través del uso y apropiación de las tecnologías en sus prácticas activistas y en particular desde la sociología de la imagen como campo problematizador, a partir de una analítica sociocultural, en la cual se aborda la inteligencia colectiva como contexto posibilitador de prácticas de liberación y de libertad. El diseño de investigación cualitativo que aplica la etnografía virtual entendida como una metodología de investigación sobre internet, para el estudio empírico de sus usos actuales, reconociendo que no es la tecnología en sí misma la que es agente de cambio, sino que son los usos y la construcción de sentido alrededor de ella. Pero va más allá, también tiene el reto de vincular las tecnologías en su quehacer investigativo.

Se exploran imágenes buscadas a través de Google bajo los parámetros “feminismo latinoamericano”, “Masculinidades Latinoamérica”, “LGBTIQ Latinoamérica” y se eligen 20 por cada colectividad, para un total de 60, que correspondan en representatividad a las categorías: pedagógicas, denuncia, empoderamiento y movilización, acerca de las cuales se presenta como resultado un análisis relacionado con la construcción de identidad y de acción colectiva que muestra cómo a través de la imagen se posicionan subjetividades transgresoras de los estereotipos de género.

Palabras clave

Cibercultura; Género; Sociología de la imagen; Ciberactivismo; Acción colectiva.



Introducción

Los colectivos, organizaciones y movimientos sociales, siempre han hecho uso de una estrategia de comunicación y divulgación intrínseca a su trabajo, han usado los medios a su alcance y al momento histórico que viven, en el caso de las reivindicaciones por los derechos de género, han hecho un recorrido icónico particular a sus demandas. otrora, fue la radio, los boletines y los periódicos clandestinos, los que se usaron para informar, educar, convocar, empoderar y movilizar, teniendo en cuenta la carga de censura que en los países de América Latina han tenido las luchas por la igualdad de género y el respeto a la diversidad.

Fueron los movimientos de mujeres contra la explotación laboral y sus demandas sociales desde una herencia de las luchas internacionalistas, las que han tenido un recorrido más largo en esta región y con más memoria y fuerza en Argentina, Chile y México, aunque todos los países han tenido sus expresiones, la cantidad de registros de memoria en prensa nos lleva a ubicar estas iniciativas en el marco de un contexto de tensión política. Un buen ejemplo fue el periódico feminista la Voz de la Mujer y Mujer Nueva.



Tomado de: https://www.clarin.com/entremujeres/voz-mujer-periodico-feminista-hablaba-amor-libre-hace-123-anos_0_EPG1ak6iA.html

Mientras que los colectivos y movimientos LGTBI se visibilizan en un ejercicio de la comunicación mucho más reciente y con la motivación de sucesos y acciones políticas en Norteamérica y Europa, es a finales de los años 60 que se crean las condiciones para la visibilidad del movimiento homosexual, al mismo tiempo que se organizan los movimientos indígenas, de negros/as y de mujeres en algunos países de América Latina. El movimiento homosexual, comenzó a plantear como problemas a considerar



en la agenda política valores de su vida cotidiana, el hacer público / privado, el autoafirmarse como sujetos homosexuales en la sociedad. Los movimientos más significativos después de 1968, surgirían en Nueva York y, en América del Sur, en Buenos Aires, como los describe Figari, C. (2010).

Tanto las movilizaciones del movimiento feminista y LGBTIQ, motivaron también la reflexión de colectivos de hombres que sintieron la necesidad de resignificar sus roles de género y participar como sujetos activos en pro de la igualdad, bajo consignas en donde visibilizaban las consecuencias del patriarcado para todos los géneros, pero esto ocurrió de manera muy reciente en los años 90 y en la última década con mucha más fuerza, como lo describe Gómez Camacho, R. A., & Meneses Cabrera, T. (2018). A partir de este contexto histórico, las luchas de género construyen unas narrativas que posicionan sus acciones de resistencia a través de palabras e imágenes en sus prácticas comunicativas y que, actualmente con el uso de las tecnologías de la información y comunicación se enriquecen en formatos multimediales, colores, fuerza estética y gráfica, pero además posiciona discursos disruptores de la heteronormatividad como elemento común, que permite la construcción de otras subjetividades y la desnormalización de la violencia de género como el resultado de mayor impacto. Ureta, A. (2005). En esta ponencia interesa ubicar esos iconos que perduran y otros que han sido modificados y reinterpretados a partir de los nuevos contextos socio técnicos y socio políticos y el uso intencionado de internet, en razón a las cuatro categorías con que fueron analizadas las imágenes.

Fundamentación

Analizar los movimientos sociales desde la perspectiva de género, implica, revisar las relaciones género – tecnología. (Butler, 2006), desde su teoría de la dimensión performativa del género, nos aproxima a la diferenciación entre "sexo" (macho/hembra) y "género" (Hombre/mujer), proponiendo la idea de que "sexo es a la naturaleza lo que género es a cultura", plantea que tanto uno como el otro son constructos socioculturales. Desde este enfoque, en las tensiones dadas por los procesos de apropiación tecnológica, vale la pena reflexionar acerca de una posible alteración y desplazamiento de las nociones de género naturalizadas en que se basa la hegemonía masculina y el poder heterosexista, desesencializado, para desestabilizar la categoría "mujer" o "mujeres", "hombre", "hombres" motiva a comprender un significante político; ahora ampliado bajo la denominación "género", pero no modificado en tanto significante.



Con esta claridad, el juego de significado y significante se tensiona en el escenario de la comunicación contemporánea y el uso de internet, como elemento estratégico de primer orden para las causas de género, en función de objetivos bien concretos. Por un lado, se rompen las hegemonías con los medios de comunicación convencionales, se posiciona una identidad de lucha y se amplifica la capacidad de distribución de contenidos, habitualmente ignorados en las agendas mediáticas.

A partir del análisis de estas intencionalidades se consideran 4 categorías: una primera denominada *pedagógica*, que se concibe como la búsqueda desde distintas formas de enseñanza y aprendizaje; el poder comunicar y expresar el acceso a un conocimiento sobre asuntos de género que no siempre es facilitado y no siempre es accesible desde canales educativos tradicionales a grandes grupos poblacionales. Una segunda categoría es la *denuncia*, desde donde se entrevé un accionar que permite la visibilización de las expresiones colectivas que de manera pública; revelan hechos y acontecimientos que afectan a colectivos de género en América Latina. Una tercera es el *empoderamiento*, contemplada desde la transformación, resignificación y la promoción de acciones que promuevan la superación de obstáculos históricamente enmarcados en las luchas género y que encuentran en los medios digitales, espacios alternativos. Por último, *movilización* vista desde la convocatoria a manifestaciones particulares de los debates propios de género, implicando no solamente las que hacen eco desde los medios digitales; sino las que trascienden o se originan en espacios públicos “físicos”.

Estas categorías surgen de la lectura realizada a los resultados arrojados por los instrumentos de observación utilizados en la investigación de la cual deriva esta ponencia y que se centraron en la página WEB, la cuenta de Facebook y Twitter de los colectivos y organizaciones sociales con enfoque de género observados. Dentro de estos instrumentos, se indaga sobre el “tema de la publicación” y que a la luz de la recopilación y análisis de las respuestas; permitió identificar temas recurrentes que se transformaron en las categorías anteriormente nombradas.

Metodología

Las prácticas metodológicas en el caso de las investigaciones sobre y en internet, han sido trabajadas de manera intensiva desde los años 90 por las ciencias de la comunicación y las ciencias sociales, advirtiendo de manera tímida pero creativa, la ausencia de protocolos de investigación social de internet, tal como lo plantea (Arriazu Muñoz, R. 2007). En este caso, el diseño metodológico usado en la investigación que



da origen a esta ponencia está centrado en el análisis etnográfico virtual, o netnografía, en el sentido que propone unas prácticas metodológicas muy cercanas a la labor artesanal del etnógrafo para comprender las manifestaciones e interacciones que se están dando en internet y específicamente en las redes sociales.

En este caso se realizó una exploración con palabras claves en el buscador de imágenes Google “Feminismos latinoamericanos”, “Nuevas masculinidades Latinoamérica” y “LGBTIQ Latinoamérica”, accediendo y se eligieron 20 por cada colectividad, para un total de 60, que correspondan en representatividad a las categorías: pedagógicas, denuncia, empoderamiento y movilización, acerca de las cuales se presenta como resultado un análisis relacionado con la construcción de identidad y de acción colectiva que muestra cómo a través de la imagen se posicionan subjetividades transgresoras de los estereotipos de género. Se trabajaron solo imágenes en contexto, es decir realizando el análisis sobre las narrativas y los aspectos comunicativos manifiestos de las páginas de donde provienen las imágenes y analizando colores, iconos comunes, intencionalidad comunicativa y estética. La información se recogió a través de una base de datos y la construcción de un archivo de imágenes donde se clasificaba cada imagen por categoría: pedagogía, denuncia, empoderamiento y movilización.

Discusión y resultados

Acciones Colectivas / Nuevas Masculinidades

Las organizaciones que trabajan en la construcción de nuevas masculinidades y que usan la comunicación visual para posicionar sus ideas, acciones y prácticas, se manifiestan de diferentes formas y con diversas estéticas; que comunican una alianza cercana con las luchas feministas, incluso en sus iconos y temáticas, en otras oportunidades plantean la construcción de nuevas subjetividades masculinas con iconos propios.



Pedagogía



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2mhG80d>

En las imágenes analizadas, como la anterior es posible ver tanto la significación visual como verbal de la imagen por un lado con el uso del pañuelo verde como apoyo a una campaña a favor de la despenalización del aborto, acompañado de consignas que cargan de un sentido al concepto de “macho” y reivindican el concepto de “varón”, así como la filiación a una postura concreta “antipatriarcales”.

En esta categoría de pedagogía, se hace referencia a imágenes que comunican más allá de la denuncia o la información, proponen un aprender colectivo, convocando a talleres, coloquios, seminarios, conversatorios, evidenciando una demanda insatisfecha en los hombres de espacios de conversación sobre roles y estereotipos de género que construyen subjetividad.

Denuncia



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2mbSvL3>



En esta oportunidad se usa el #hombresnomachos, para amplificar la denuncia que a su vez como tendencia es una campaña informativa y disruptora contra la normalización de comportamientos masculinos aprendidos, la figura humana masculina puesta de cabeza tiene una connotación acerca de la necesidad de cambiar el orden de las cosas. El hashtag acompañando imágenes de denuncia, se ha vuelto bastante popular en las redes sociales, teniendo en cuenta que como herramienta comunicativa las etiquetas permiten presentar de manera pública, y organizados en la línea del tiempo, todos los contenidos que posean misma etiqueta, facilitando así no solo su ubicación, sino el intercambio de información o contenidos entre distintos usuarios, sobre determinados temas o acontecimientos. Estas características le otorgan mayor visibilidad a los temas.

Empoderamiento



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2meQldH>

En el caso de las masculinidades, el empoderamiento como lo muestran las imágenes analizadas, comunica la construcción de roles en el espacio de lo privado, desde la ética del cuidado, hacia la paternidad como lo muestra la imagen anterior, pero también a prácticas cotidianas, estereotipadas como femeninas.

Movilización



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2kMnInJ>



Las imágenes que representan movilización, se centraron en dar cuenta de acciones de movilización no solo en el mundo virtual, sino que trascienden la movilización de información y contenidos hacia la toma del espacio público, si bien se dan acciones digitales previas de convocatoria, la movilización efectiva de los cuerpos que se toman las calles y alzan pancartas que posicionan narrativas afines a sus intereses, expresa una triple movilización en donde el ciberespacio es escenario de invitación, motivación y movilización de información, el espacio público es lugar de ocupación de debate público físico y los registros de estas acciones son llevados de nuevo al ciberespacio para amplificar la acción, para preparar otras y como prueba, como existencia post facto de que ocurrió y cómo ocurrió.

Acciones Colectivas Feministas

La presencia de imágenes en el ciberespacio nos ofrece la posibilidad de acceder a realidades que proporcionan información social y que permiten contemplar cómo canales de comunicación digitales mantienen lógicas de repetición. Es el caso de las imágenes relacionadas con el feminismo, que extienden sus símbolos, colores, temáticas, estéticas; construidas en escenarios “reales”, a escenarios virtuales.



Imagen tomada de <https://bit.ly/2miAXgz>

Es difícil distinguir entre lo pedagógico y el empoderamiento cuando nos referimos a imágenes acordes a esta categoría. La imagen mostrada en este punto combina tanto los colores, los símbolos y lo verbal para condensar en un afiche la propuesta pedagógica sobre el feminismo. Pero que al mismo tiempo pueda comunicar variedades, identidades y saberes necesarios. Lo pedagógico parece entonces trascender desde y hacia lo transformador



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2kmrXXa>

La denuncia se materializa en la protesta, en la movilización, en la visualización en lo público de lo acontecido en privado. Parece que está (la denuncia) se aparta de la justicia estatal y de manera contestataria emerge desde y para lo público. Estos escenarios son trasladados al ciberespacio (como un espacio democratizador) y a través de imágenes complementan y recogen lo tradicionalmente simbólico, ahora como distintivo que permite llegar a públicos más amplios. En esta estética prevalece el símbolo de lo femenino, el puño cerrado en alto, la pancarta insinuante.

Empoderamiento



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2kJIYuk>

Empoderar busca transformar y esto implica apropiarse. La imagen como la mostrada en esta categoría además de querer dar protagonismo a lo femenino en lo digital y en lo “real”; también procura apostar a vincular lo político como elemento circundante en el

empoderamiento de la mujer y reconocer desde allí que las apuestas por la diversidad son el canal con el cual la transformación puede ser posible.



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2mgeSiD>

El ciberespacio irrumpe como escenario de lucha y movilizaciones. Generar campañas como la ocurrida en Argentina en el año 2018 a favor del aborto legal, implicó llevar a las redes sociales mediadas por lo digital; imágenes que relacionaran símbolos ligados visualmente a su lucha y capacidad de convocatoria. La pañoleta verde usada por la mujer representa una posición a favor de la aprobación de la ley y cubrir elementos urbanos con estas “piezas”, propone la necesidad de evidenciar en la calle ocupada, en la plaza ocupada; que las voces de las minorías deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre políticas públicas.

Acciones colectivas LGBTIQ

Pedagógicas



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2kJBQ19>



Prevalece los colores de la bandera del arcoíris que históricamente ha representado la diversidad LGTBI y para el caso de la imagen analizada, es utilizada para distinguir el significado de las diferentes siglas que representan las diversas orientaciones sexuales. Lo pedagógico para este caso en las imágenes LGTBI, se enfoca en distinguir, identificar y visibilizar las ampliaciones a las siglas que, en su afán de universalizarse, ha desembocado en diferentes abreviaturas.

Denuncia



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2IPwNMQ>

El temor a la estigmatización, a la homofobia, al prejuicio e incluso el desconocimiento en servicios como el de la salud; hace que la denuncia esté enfocada a la necesidad de reconocimiento de realidades, necesidades e incluso las condiciones de poblaciones diversas como la LGTBI. La estética de esta imagen vuelve a enmarcarse en resaltar la bandera arcoíris sobre colores grises, simbolizando luchas de igualdad en trato sanitario.

Empoderamiento



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2kkuqkT>

La estética con la que se construyen narrativas visuales desde los colectivos LGBTI, sin duda son los colores, como sinónimo de diversidad, no solo con lo otro, sino al interior mismo de los colectivos. La bandera y el día del orgullo gay son a nivel internacional los iconos más fuertes y visibles de empoderamiento de sus derechos y su identidad.

Movilización



Imagen tomada de: <https://bit.ly/2mhJkZK>

Por su condición de diversidad, sus luchas también transitan hacia los feminismos y las masculinidades, dependiendo de las coyunturas y las demandas sociales, pueden compartir intereses y mecanismos de lucha, por ejemplo madres lesbianas, padres homosexuales, entre otros, pero sus luchas particulares son por el respeto de sus vidas desde la diferencia, ya que la homofobia en la región latinoamericana hace que esta población esté permanentemente amenazada y esto es visible en el ciberespacio usado como medio de denuncia y movilización.

Conclusiones

Mientras los movimientos feministas tienen dentro de sus luchas el tránsito con voz y poder de lo privado a lo público como un lugar de acción y decisión, para los movimientos de hombres “nuevas masculinidades” por el contrario buscan hacer tránsito y presencia y validarse desde el espacio público a los espacios privados.

Se encontraron imágenes como la de los cromosomas XY que corresponden a una mirada biologicista y teniendo en cuenta que estos movimientos abogan por un enfoque de género desde lo cultural y no desde lo heteronormativo, puede ser contradictorio el símbolo con el discurso.



Como elementos comunes, en todos los colectivos, se denuncia al patriarcado y se presentan a los hombres como generadores de violencia y las mujeres y población LGBTIQ como receptoras de violencia. Así mismo las mujeres como sujetos denunciadores y lo masculino como sujeto denunciado.

En las masculinidades lo pedagógico trata de visibilizar condiciones emergentes de empoderamiento en paternidades o actividades sensibles (bordar, cocinar), la movilización hacia lo privado, empoderamiento entendido como asumir roles no convencionales y de denuncia muy poco. En este caso no son los cuerpos que se sienten vulnerados, sino los roles que han sido socialmente normalizados.

La movilización se asume tanto como ocupación de los espacios digitales, como de los espacios físicos y se crean alternativas como los twitteratones, las tendencias a través de hashtag, que movilizan tanto narrativas como acciones políticas que impactan lo público y lo privado.

Notas

¹ carlos.martinez@unad.edu.co. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD – Colombia.

² tania.meneses@unad.edu.co. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD – Colombia.

Referencias Bibliográficas

Arriazu Muñoz, R. (2007) ¿Nuevos medios o nuevas formas de indagación?: Una propuesta metodológica para la investigación Social on-line a través del foro de discusión.FQS. Forum Qualitative Research/ Sozialforschung. 8, Art. 37. Disponible en <http://www.qualitative-research.net>

Botero Urquijo, D. A., López Sáenz, C., Tillman, R., Ancil Avoine, P., Rodríguez Torres, D. A., Jiménez Garcé, C. M., ... & Mendoza Ariza, J. N. Perspectivas sobre Género: una Mirada desde las Ciencias Humanas. <https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/19439/1/177-69-PB.pdf>

Figari, C. (2010). El movimiento LGBT en América Latina: institucionalizaciones oblicuas. *Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario*, Buenos Aires, Nueva Trilce, 227.

Butler, J. (2007). *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Paidós.



Urquijo, D. A. B., Beltrán, L. M. H., & Cabrera, T. M. (2015). Equidad de género en Bucaramanga. Teoría, política pública y prácticas de vida desde la voz de las mujeres en la ciudad. *Revista Temas*, 3(9), 189-205.

Gómez Camacho, R. A., & Meneses Cabrera, T. (2018). Género y emergencias sociales. Vinculando las masculinidades a las políticas públicas desde la bioética social. *Revista Latinoamericana de Bioética*, 18(2), 62-79.

Jenkins, Henry (2008). *La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona, Paidós.

Schuster, F., Pérez, G., Pereyra, S., Armesto, M., Armelino, M., García, A., ... & Zipcioglu, P. (2006). Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003. *Documentos de trabajo*, 48(1), 1-70.

Turpo Gebera, O. W. (2008). La netnografía: un método de investigación en Internet. *Educar*. 42, 81-93

Ureta, A. (2005). La Red al servicio de las mujeres. Aproximación a la relación mujer y medios de comunicación en Internet. *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 11, 375-392.



Movimentos sociais, educação superior e novas epistemologias.

Joviles Vitório Trevisol¹

Resumo

As transformações vêm impactando diretamente as instituições de ensino superior. A centralidade que a educação, a ciência e a tecnologia assumiram nas últimas décadas fez aumentar o interesse pelo que as universidades formam e produzem. Como o conhecimento firmou-se como um pilar fundamental do desenvolvimento econômico e social, os diferentes atores procuram extrair das universidades os mais variados compromissos e resultados, ora mais alinhados aos interesses públicos, ora mais aos interesses econômicos e profissionais. Tais disputas e expectativas desafiam as universidades sob vários aspectos, obrigando-as a repensarem os seus fins, a sua governança e os seus papéis na sociedade. Apesar de não serem os únicos, nem os atores mais influentes, os movimentos sociais (MS) também interpelam a universidade. Com o propósito de compreender melhor as indagações que os MS dirigem à universidade, optou-se em desenvolver uma pesquisa empírica envolvendo alguns dos principais movimentos sociais do Sul do Brasil. O levantamento dos dados foi feito entre 2012 e 2013 e retomado entre agosto de 2016 a dezembro de 2018. Além da pesquisa bibliográfica e documental, foram realizadas 22 entrevistas. Entre os tantos resultados do estudo, cabe destacar a problematização epistemológica formulada pelos MS. Eles desafiam a universidade a se repensar enquanto instituição que produz e legitima determinados conhecimentos, assim como, deslegitima e torna ausentes outros. Eles denunciam o elitismo, o academicismo reinante e o isolamento que tem prevalecido na maior parte das universidades. O conhecimento deve vir acompanhado de uma reflexão crítica sobre o conhecimento do conhecimento que a universidade produz. Ao promover a ciência e a tecnologia, a universidade também precisa explicitar que ciência está defendendo, assim como, os compromissos éticos e políticos que a fundamentam.

Palavras chave

Movimentos sociais; Educação superior; Novas epistemologias; Ciência.

Resumén

Las transformaciones ven impactando directamente las instituciones de enseñanza superior. La centralidad que la educación, la ciencia y la tecnología han asumido en las últimas décadas ha aumentado el interés por lo que las universidades forman y



producen. Como el conocimiento se firmó como un pilar importante del desarrollo económico y social, los diferentes actores procuran extraer de las universidades los más variados compromisos y resultados, a veces más en línea con los intereses públicos, ora más en línea con los intereses económicos y profesionales. Estas disputas y expectativas desafían las universidades de muchas maneras, obligándolas a repensaren sus fines, a suya gobernanza, y sus papeles en la sociedad. Aunque no son los únicos, ni los actores más influyentes, los movimientos sociales (MS) también interpelan la universidad. Con el propósito de comprender mejor las indagaciones que los MS dirigen a la universidad, ha se optado en desarrollar una pesquisa empírica envolviendo algunos de los principales movimientos sociales del Sur de Brasil. El levantamiento de datos fue hecho entre 2012 y 2013 y retomado entre agosto de 2016 a diciembre de 2018. Además de la pesquisa bibliográfica y documental, fueran realizadas 22 entrevistas. Entre los tantos resultados del estudio, cabe destacar la problematización epistemológica formulada por los MS. Ellos desafían la universidad a repesarse como institución que produce y legitima determinados conocimientos, así como, deslegitima y torna ausentes otros. Ellos denuncian lo elitismo, el academicismo reinante y el aislamiento que ha prevalecido en la mayor parte de las universidades. El conocimiento debe venir acompañado de una reflexión crítica sobre el conocimiento do conocimiento que la universidad produce. Al se promover la ciencia y la tecnología, la universidad también precisa explicitar que ciencia está defendiendo, así como los compromisos éticos y políticos que a fundamentan.

Palabras clave

Movimientos sociales; Enseñanza superior; Nuevas epistemologías; Ciencia.

Introdução

As transformações em curso impactam e desafiam profundamente as instituições de ensino superior (IES). As universidades, em particular, se encontram numa encruzilhada. O prestígio e o reconhecimento social, resultantes de séculos de história, não as livram dos questionamentos sobre os papéis que devem exercer na atualidade e no futuro. A centralidade que a educação, a ciência e a tecnologia assumiram nas últimas décadas fez aumentar o interesse pelo que as universidades formam e produzem, tornando-as depositárias de expectativas dos mais variados atores e instituições nacionais e internacionais.



Enquanto guardiãs do conhecimento historicamente produzido, as universidades estão no centro das disputas estratégicas sobre a liderança e a hegemonia do sistema-mundo e da chamada sociedade/economia do conhecimento (Drucker, 1976; Leydesdorff, 2006; Etzkowitz, 2008; Unesco, 2013). Como o conhecimento firmou-se como um pilar fundamental do desenvolvimento econômico e social, os diferentes atores procuram extrair das universidades os mais variados compromissos e resultados, ora mais alinhados aos interesses públicos, ora mais aos interesses econômicos e profissionais. Como destaca Martins (2018, p. 5), as complexas demandas apresentadas pelos atores econômicos, políticos e da sociedade civil, particularmente os movimentos sociais (MS), desafiam a autonomia universitária e seu *modus operandi*.

Tais disputas e expectativas desafiam as universidades sob vários aspectos, obrigando-as a repensarem os seus fins, a sua governança e os seus papéis na sociedade. Conforme destacam Ward (2014) e O'Byrne e Bond (2014), as IES são pressionadas a fazerem uma opção entre os dois principais modelos de universidade em disputa na atualidade: o intelectual (voltada para a produção do saber) e o gerencial (voltada aos interesses econômicos e ao mercado de trabalho).

A despeito de serem os mais influentes, os atores econômicos não são os únicos a exercerem poder nesse cenário de transformações e a exigir uma pluralidade de funções da universidade. No rol dos novos atores cabe destacar também a crescente presença e protagonismo dos movimentos sociais (MS). Por meio de diferentes estratégias de ação, eles operam no cotidiano universitário, influenciando na definição das políticas institucionais. Eles interpelam as universidades sobre os seus papéis, sobretudo em relação a temas como direitos humanos, meio ambiente, inclusão social, ações afirmativas, gênero, etnia, educação, agricultura familiar, saúde pública etc. Eles desafiam as instituições universitárias a se democratizarem de dentro para fora e de fora para dentro (Santos, 2005a; Trevisol, 2014, 2015).

A presença e a atuação dos MS nas universidades e nos processos de definição de políticas públicas de educação superior ainda foram pouco estudadas. Essa lacuna motivou o presente estudo, cujo propósito principal foi compreender as interpelações que os MS dirigem às universidades e as pautas que defendem. Buscou-se entender, no âmbito deste propósito, as razões que têm motivado os MS a inserirem a educação superior entre as suas pautas de luta. De forma mais objetiva, procurou-se responder às seguintes questões: (i) que razões estão na origem da crescente importância que os



MS têm conferindo à educação superior? (ii) por que os saberes acadêmicos passaram a integrar as lutas recentes dos movimentos sociais?

Itinerário da pesquisa

A pesquisa empírica foi desenvolvida entre 2012 e 2013 (Trevisol e Ló, 2014) e retomada entre agosto de 2016 a dezembro de 2018 (Luz, 2018), tendo como recorte espaço-temporal a região Sul do Brasil. A escolha deveu-se ao fato da região ser o berço dos principais MS agrários do Brasil, cabendo destaque para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento das Mulheres Agricultoras (MMA), o Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (FETRAF SUL), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), o novo sindicalismo agrário e diversas organizações dos povos indígenas.

A investigação foi desenvolvida por meio de métodos e de técnicas da pesquisa documental (atas, projetos, relatórios, matérias de jornais e revistas sobre a atuação dos MS, fotos, publicações variadas etc.) e de entrevistas. Ao todo foram realizadas 22 entrevistas, com duração média de 1.5 (uma hora e meia) cada. Foram entrevistadas as principais lideranças da região que atuaram, a partir de 2004, no processo de criação da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), sendo onze lideranças de Santa Catarina; 05 do Rio Grande do Sul; 05 do Paraná e 01 do Distrito Federal. 36% se declararam pertencer diretamente aos MS, sendo, desse total, 75% pertencentes ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 12%, ao Movimento das Mulheres Camponesas (MMC) e 13%, ao Movimento dos Atingidos por Barragens.

As entrevistas e o conjunto dos dados da pesquisa documental foram analisados sob uma perspectiva histórico-sociológica. Ao invés de estabelecer tipologias e escalas, pretendeu-se algo distinto, mais próximo ao que Boaventura de Sousa Santos (2004, 2005b) denomina de “sociologia das ausências” e “sociologia das emergências”. Segundo ele (Santos, 2004, p. 798):

[...] Enquanto a sociologia das ausências expande o domínio das experiências sociais já disponíveis, a sociologia das emergências expande o domínio das experiências sociais possíveis. As duas sociologias estão estreitamente associadas, visto que quanto mais experiências estiverem hoje disponíveis no mundo, mais experiências são possíveis no futuro. Quanto mais ampla for a realidade credível, mais vasto é o campo dos sinais ou pistas credíveis e dos futuros possíveis e concretos. Quanto maior for a multiplicidade e



diversidade das experiências disponíveis e possíveis (conhecimentos e agentes), maior será a expansão do presente e a contração do futuro.

A sociologia das ausências inscreve-se no esforço de mostrar aquilo que existe, mas que historicamente foi sufocado, silenciado, escondido, abafado, reprimido, inferiorizado ou excluído. Ela move-se no campo das experiências sociais. Procura expandir o domínio das experiências sociais já disponíveis e revelar a diversidade e a multiplicidade das práticas sociais. Fazer uma sociologia das ausências é “transformar objetos imprevisíveis em possíveis, objetos ausentes em objetos presentes” (Santos, 2004, p. 793). Ela valoriza as experiências sociais, ao invés de desperdiçá-las.

A sociologia das emergências, por sua vez, expande o domínio das experiências sociais possíveis. Move-se no campo das expectativas sociais. É, como propõe Boaventura de Sousa Santos (2004, p. 796), “a investigação das alternativas que cabem no horizonte das possibilidades concretas”. Ela amplia o presente, juntando ao real amplo as possibilidades e expectativas futuras que ele comporta.

Ancorada nessas premissas teórico-metodológicas, as entrevistas foram organizadas em categorias de análises. Buscou-se compreender as interpelações que os MS dirigem às universidades e as teses que defendem. Pode-se afirmar que, do ponto de vista metodológico, a análise realizada assemelha-se ao ofício de traduzir, pois a tradução inscreve-se no esforço de produzir inteligibilidades sobre os objetos encontrados, de tornar presente o que está ausente, de tornar conhecido o que está desconhecido. Como defende Boaventura de Sousa Santos (2004, 2005b), o trabalho de tradução valoriza a experiência, pois ela é uma tentativa de criar inteligibilidades recíprocas entre as experiências do mundo, tanto as disponíveis, quanto as possíveis.

Ao longo deste texto apresentaremos uma síntese das principais indagações, críticas e proposições que os MS dirigem à universidade contemporânea. Esse conjunto de atores distancia-se tanto do modelo intelectual de universidade, quanto do gerencial. Eles não defendem a universidade do saber nos moldes da tradição *humboldtiana*, pois a consideram demasiadamente elitista e distante da sociedade. Também criticam o modelo gerencial por considera-lo utilitarista e subserviente aos interesses do mercado e das camadas mais ricas da sociedade. Defendem um terceiro modelo denominado de “universidade popular”.



A universidade popular

O termo popular é recorrente nas entrevistas realizadas. Por meio dele os sujeitos expressam uma gramática de sentidos, de saberes e de práticas que se distancia do modelo elitista e tradicional de universidade. Ao defendê-lo os entrevistados retomam, ora parcial ora integralmente, algumas teses propostas e implementadas pelas universidades populares (UPs) criadas na Europa a partir do final do século XIX, oriundas, na sua grande maioria, das diferentes organizações dos trabalhadores (sindicatos, cooperativas etc.) que lutavam pela transformação social e pela emancipação humana (Palacios, 2002; Osório, 2006; Benzaquen, 2011). Influenciados pelos ideários socialistas e anarquistas, os trabalhadores passaram a travar importantes lutas no campo da cultura e da formação humana, em defesa do direito à educação e ao acesso à cultura letrada. O elitismo educacional passou a ser combatido por meio de iniciativas autogestionadas de formação, no âmbito das quais se ensinava e se aprendia filosofia, ciência, política, artes etc.

De acordo com os estudos desenvolvidos por Palacios (2002), Osório (2006) e Benzaquen (2011), a França é considerada o berço das UPs (2). As experiências francesas foram influenciando outras iniciativas e formatos institucionais de UPs em diversos países, como a Itália (3), Espanha (4), Portugal (5), Bélgica (6), Egito (7), Inglaterra, Polônia, Dinamarca, Suíça, Estados Unidos, Tunísia etc. Algumas UPs surgiram como extensões das universidades existentes, dispendo de professores e servindo-se dos métodos das instituições tradicionais (UPs de Viena, Turim e Oviedo). Outras se organizaram de forma independente, distante dos poderes oficiais e no formato de educação não formal (UPs da França, Polônia, Bélgica e algumas italianas).

Na Europa, as UPs cresceram significativamente até a metade dos anos trinta do século passado. A II Guerra Mundial e a instalação de governos autoritários em vários países europeus, especialmente na Espanha (Franco) e Portugal (Salazar) estancaram o processo de criação de novas experiências e expuseram as existentes a uma profunda crise. Assim como na Europa, os regimes autoritários implantados na América Latina, sobretudo na segunda metade do século XX, também impuseram severas restrições às experiências de universidades populares e de educação não formal e informal.

O processo de redemocratização ocorrido a partir dos anos 80 do século passado abriram novas perspectivas. Em 1979, a título de ilustração, foram instaladas na Espanha as UPs de San Sebastián de los Reyes, Puertollano, Elche, Tauste e Cartagena. Em 1981 e 1982, respectivamente, foram criadas a Federação Espanhola



de Universidades Populares (FEUP) e a Federação Nacional das Universidades Populares Italianas. A FEUP tinha, inicialmente, 87 UPs. Em 1993 já eram 111 e, em 2014, 210 instituições, atendendo mais um milhão de pessoas (Osorio, 2006; FEUP. Disponível em: www.feup.org. Recuperado em: 31 de agosto de 2019).

A tabela abaixo apresenta a relação de algumas das principais universidades populares em atuação no mundo atualmente:

Anexo 1: Tabela 1

Ora inspiradas nas experiências concretas de UP em diferentes países, ora fundamentados em abordagens teóricas do campo da teoria crítica e da educação popular (marxismo, anarquismo, existencialismo, filosofia da libertação, teologia da libertação, pedagogia da autonomia, educação popular etc.), as lideranças entrevistadas defenderam, em primeiro lugar, a necessidade de democratizar a universidade de dentro para fora e de fora para dentro.

A crítica ao elitismo está presente no conjunto das falas. Para os MS, as universidades são, em geral, instituições ocupadas pelas elites detentoras do capital econômico, social e cultural. Segundo eles, os mais ricos têm se servido dela para reproduzir e ampliar o seu poder em relação aos mais pobres e excluídos (Chauí, 1999, 2001; Santos, 2005a; Silva Junior e Sguissardi, 2001). Os estudantes ingressam em busca de um título/prêmio que lhes permita exercer, de forma legítima, um poder que, em geral, já possuem.

Os excertos abaixo, de algumas lideranças entrevistadas, sintetizam as principais formulações críticas que os MS dirigem ao elitismo:

[...] Defendemos uma universidade pública e popular, centrada no conceito de cidadania e voltada para o desenvolvimento social [...] Lutamos por uma universidade pública que, sendo um bem público, oferece ensino gratuito e atende ao direito de acesso ao ensino superior daqueles que historicamente foram excluídos desse processo (os trabalhadores, os camponeses, os negros, os índios, as mulheres, etc. (E 18).

[...] A universidade é um espaço elitista [...] Ainda há uma grande predominância de uma ciência que está no interesse do capital, não está no interesse da transformação social (E-04).

[...] Nós não queremos uma universidade que esteja dissociada da comunidade, que esteja encastelada, que esteja longe da sociedade, que esteja acima da sociedade, uma universidade arrogante, que faz da ciência um lugar de dominação. Isso não queremos; não queremos uma universidade que fragmenta o conhecimento e, nesta fragmentação



do mundo, ao fragmentar, impede a construção da consciência que depende do todo; não queremos uma universidade elitizada e corporativista, mesmo que em alguns momentos a gente perceba que a sociedade brasileira [...] expandindo mais universidades, tenha construído cada vez mais espaços de mobilizações sociais importantes (E-12).

[...] A nossa crítica é: pra quem elas formam? Pra quem a ciência está a serviço? Ela está a serviço do capital, não é? [...] (E-02).

A democratização da universidade implica, segundo eles, concebê-la como um bem público, cujos bens simbólicos produzidos devem ser estar acessíveis a todos, sobretudo aos grupos sociais mais excluídos. Ao invés de uma universidade- fortaleza (que se coloca acima, numa posição superior e distante da comunidade onde está inserida), os MS defendem uma universidade-rede, que estabelece interações e amplia zonas de contato com a sociedade (Santos 2005a). Uma universidade de proximidade implica assumir, neste sentido, novos compromissos pedagógicos, éticos e epistemológicos.

O primeiro desses compromissos é com a inclusão social e a justiça cognitiva. Os entrevistados destacam a importância das políticas de ações afirmativas e de democratização do acesso ao ensino superior. Tendo em vista as históricas desigualdades, tais políticas são fundamentais para que os filhos dos mais pobres possam acessar a universidade.

[...] nós sempre defendemos o quanto é importante para a classe trabalhadora e para as populações de menor renda terem acesso ao ensino superior que sempre foi muito elitista no país. Apenas alguns atores sociais chegavam à universidade até pouco tempo atrás. Então esta questão sempre fez parte dos nossos sonhos, principalmente de quem mora no interior (E-7).

[...] as famílias vivem dilemas cruciais, por que os filhos querem estudar, os pais querem ver os filhos estudando, mas os pais não têm dinheiro. O filho não tinha condições e tinha que abandonar o sonho de ter um curso superior [...] (E-14).

Os sujeitos entrevistados destacam que o acesso à universidade e a apropriação social do conhecimento científico e da tecnologia que elas produzem são essenciais para a redução das desigualdades. Mais que em qualquer outra época, a justiça cognitiva é condição essencial para a justiça social e para o desenvolvimento humano e a sustentabilidade ambiental. A injustiça cognitiva exclui as pessoas do acesso aos saberes que permitem constituí-las como seres autônomos e, além disso, priva-as das



condições de se reconhecerem como produtoras de seus próprios conhecimentos e práticas. Mais que distribuição equitativa do saber científico, a justiça cognitiva promove uma abertura epistemológica e reforça os compromissos da universidade com a emancipação social (Santos, 2004, Arroyo, 2011).

A democratização da universidade, neste sentido, vai muito além do acesso. O mesmo movimento que abre a universidade para a sociedade deve ser o que traz outras formas de conhecimento para dentro dela. Assim concebida, a democratização de fora para dentro rompe com as formas tradicionais e hegemônicas de conceber e realizar a relação universidade/sociedade e as interações entre saberes científicos e as outras formas de conhecimentos.

[...] os trabalhadores, eles precisam dominar o conhecimento, os trabalhadores precisam se apropriar da ciência e produzir ciência e conhecimento de maneira que possa mudar sua vida, e quando a gente fala de mudar de vida, não só a vida pessoal, mas uma coisa mais coletiva (E- 03).

[...] reconhecer que um agricultor conhece muito pela sua história de vida e fazê-lo compreender que, o que nós estamos construindo, é aquilo que ele também deseja, que é uma sociedade que tenha mais qualidade de vida, que ele percebe no cotidiano (E-12).

[...] realizar pesquisas que sejam voltadas para os interesses dos pequenos, da classe trabalhadora, que hoje, muitas vezes, o capital se apropriou das ciências. Então nós queremos que a universidade dispute esses espaços, que a universidade venha pensar políticas e projetos de extensão e pesquisa junto com nós (E-04).

Os MS criticam o histórico distanciamento entre quem produz o conhecimento científico e quem se apropria dele. Para eles há uma certa “desresponsabilização social” da universidade na medida em que ela não se pergunta sobre a relevância e a pertinência do conhecimento produzido. Segundo os entrevistados, a universidade precisa estabelecer uma relação mais intensa e responsável com o conjunto das instituições e atores sociais, permitindo e incentivando uma maior participação na produção e na avaliação dos impactos que decorrem da aplicação do conhecimento. Neste sentido, quanto maior for a inserção da ciência na sociedade tanto maior será a inserção da sociedade na ciência.

Os entrevistados defendem o diálogo entre os saberes produzidos pela universidade e os produzidos pelos demais atores e instituições. Eles propõem uma espécie de “ecologia de saberes” (Santos, 2004, 2005a), onde a universidade declina de sua



pretensão monopolista e reconhece os demais produtores de saberes e práticas. A ecologia de saberes (revalorização dos saberes não científicos e a revalorização do próprio saber científico pelo seu papel na criação ou aprofundamento de outros saberes não científicos) permite reatar o conhecimento científico ao senso comum, tornando-o conhecimento apropriado e utilizado pelos diferentes sujeitos e atores sociais. O diálogo e a ecologia de saberes promovem, na prática, o reconhecimento de outras formas de saber. Nessa perspectiva, como tão bem sintetiza Boaventura de Sousa Santos (1995b, p. 224), quanto mais a universidade se insere na sociedade, tanto mais esta se insere na universidade. A universidade acaba por ser:

[...] um ponto privilegiado de encontro entre saberes. A hegemonia da universidade deixa de residir no caráter único e exclusivo do saber que produz e transmite para passar a residir no caráter único e exclusivo da configuração de saberes que proporciona” (Santos, 1995b, p. 224).

O diálogo entre os saberes (interconhecimento) acaba sendo, também, um diálogo interdisciplinar. Os entrevistados destacam a importância dos pesquisadores dialogarem com os MS para compreenderem outros critérios de relevância científica e social e prioridades, que vão além dos convencionalmente aceitos pela rigidez metodológica e pela hierarquia comumente presentes no meio acadêmico.

Os MS defendem um modo de ser da universidade e uma forma de construir o conhecimento científico a partir de uma relação dialógica e interativa com a sociedade e com as suas principais necessidades. A interdisciplinaridade é uma ideia-força que vai muito além das relações/interações entre as disciplinas acadêmicas. O núcleo duro da proposta interdisciplinar defendida pelos entrevistados reside na relação entre ciência e sociedade, entre universidade e desenvolvimento, entre conhecimento científico e transformação social. A dimensão epistemológica se articula com as dimensões políticas e pedagógicas. Como destacam dois entrevistados:

[...] Entendemos também o que temos de mais avançado na construção do conhecimento é a interdisciplinaridade. Não queríamos a fragmentação do conhecimento, aquele que é especialista e que sabe quase tudo sobre quase nada [...] Sempre tivemos isso presente. Não adianta ter os melhores profissionais; é preciso termos também bons cidadãos, bons pesquisadores, que ajudam na transformação da sociedade [...] O fundamental da ciência é o pensamento crítico. (E-19).



Porque ter departamento na universidade se o conhecimento humano não é departamentalizado [...] Não defendemos os departamentos [...] não pode ter essa separação, essa fragmentação. (E-15).

O diálogo e a integração entre diferentes saberes e disciplinas possibilitam interpretações mais abrangentes e complexas e uma intervenção mais qualificada na realidade. A interdisciplinaridade promove uma abertura conceitual e metodológica menos unilateral, hierárquica e rígida e mais interativa, contextual e sensível à complexidade do mundo natural e humano. Ela ajuda a pensar a produção do conhecimento, os currículos e a organização dos pesquisadores na universidade a partir de parâmetros que vão além da tradicional e hegemônica disciplinarização e, com ela, a especialização e a fragmentação do saber. A realidade, como tão bem destaca Claude Raynault (2013), não se organiza em fronteiras disciplinares. A fragmentação desencadeia um reducionismo arbitrário, tornando o cientista um ignorante especializado (Santos, 1989, 2003).

Considerações finais

Como evidenciamos ao longo deste trabalho, os MS formulam e defendem teses que obrigam a universidade a se pensar enquanto instituição que produz e legitima determinados conhecimentos, assim como, deslegitima e torna ausentes outros. Trata-se de uma problematização simultaneamente pedagógica, ética, política e epistemológica. Eles denunciam o elitismo, o academicismo reinante e o isolamento que tem prevalecido na maior parte das universidades. Eles procuram (re) introduzir elementos que permitam reinventar, sobre novas bases, a universidade, o conhecimento por ela produzido e as próprias relações entre ciência e a sociedade.

Hoje, mais que em qualquer outra época, a vigilância epistemológica precisa ser praticada permanentemente pois os problemas do nosso tempo tem uma relação direta com a ciência. Os problemas assumiram uma dimensão epistemológica, entre outras razões, porque a ciência está na origem deles, ora decorrente do excesso de presença, ora da demasiada ausência. Não é mais possível defender todo e qualquer conhecimento pela simples razão de ser denominado e aceito como científico.

A legitimação do conhecimento científico não pode dar-se *ante-factum* (Beck, 1992; Santos, 2002). As contradições e as ambivalências da racionalidade técnico-científica hegemônica instauraram uma sensação de perplexidade e de desconfiança. Ao tornar-se parte do problema, a ciência deixou de ser plenamente credível. De forma



ambivalente, a ciência integra a espinha dorsal de nossa época. O ser e o devir, o presente e o futuro, a natureza e a sociedade, a ela se ligam diretamente. Ao se tornar uma poderosa força produtiva, a ciência incide diretamente sobre a vida natural e humana, transformando e recriando dinâmicas e relações. Como tão bem sintetiza Boaventura de Sousa Santos (2002, p. 117):

[...] Os nossos problemas sociais assumiram uma dimensão epistemológica quando a ciência passou a estar na origem deles. Os problemas não deixaram de ser sociais para passarem a ser epistemológicos. São epistemológicos na medida em que a ciência moderna, não podendo resolvê-los, deixou de os pensar como problemas.

Ao promover a ciência e a tecnologia, a universidade também precisa explicitar que ciência está defendendo. O conhecimento deve vir acompanhado de uma reflexão crítica sobre o conhecimento do conhecimento que a universidade produz.

Anexo

INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO	PAÍS
Federación Española de Universidades Populares	Espanha
Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane	Itália
Universidade Popular de Montreal	Canadá
Università Popolare di Roma	Itália
Università Popolare di Parma	Itália
Université Populaire de Lyon	França
Université Populaire de Bruxelles	Bélgica
Fondazione Università Popolare di Torino	Itália
Université Populaire Africaine	Suíça
Université Populaire de Caen	França
Université Populaire Sans Frontières	França
Rede Universidade Nômade	Rede transnacional
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas	Equador
Instituto Universidade Popular	Brasil
Escola Nacional Florestan Fernandes	Brasil
Escola de Formação de Educadores Sociais no Recife	Brasil
Universidad de La Tierra	México
Universidad Madres de Plaza de Mayo	Argentina
Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Mouen-Orient	França
IEPALA	Espanha

Tabela 1. Relação de Universidades Populares em diversos países

Fonte: Benzaquen, 2011. Dados extraídos de: www.universidadepopular.org. Recuperado em 31 de agosto de 2019.

Notas

1- Pós-Doutor em Sociologia pela Universidade de Coimbra. Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFFS. E-mail: joviles.trevisol@uffs.edu.br.

2 Em 1899 surgiu a “Sociedade de Universidades Populares”, que visava organizar e desenvolver o ensino superior do povo e a educação ético-social em toda a França



(Palacios, 2002). Em algumas décadas surgiram cerca de cinquenta UPs em Paris e em seus arredores e algumas dezenas delas em outros países vizinhos.

³ Na Itália foram criadas várias UPs, cabendo destaque para a Universidade Popular de Turim, criada pioneiramente em 1900, e as UPs livres de Livorno, Veneza, Bolonha e Milão.

⁴ Na Espanha cabe destacar as UPs de Oviedo, Valência, Madri e Barcelona. As UPs surgiram das atividades de extensão universitária, coordenadas pelas próprias instituições universitárias. Em 1892 foi realizado o Congresso Pedagógico Internacional, em Madrid. Depois de algumas experiências iniciais (Saragoça, Barcelona e Sevilha), o projeto mais importante foi desenvolvido na Universidade de Oviedo (Osório, 2006). Conforme descreve López e Lorenzo (2009), a Universidade Popular de Oviedo foi criada em 1901, como extensão universitária, uma espécie de UP “oficial”. A Universidade Popular de Valência, criada por Vicente Blasco Ibáñez, tinha um caráter mais autônomo, inspirada no modelo francês, criado por e para o povo. A UP de Madri foi fundada pelos trabalhadores e pelos estudantes do Ateneo de Madri.

⁵ Em Portugal a Universidade Popular do Porto foi criada em 1911 e a Universidade Livre de Lisboa, em 1912. De acordo com a análise de Pita (1989, p. 251), o propósito fundamental das universidades populares portuguesas não era disseminar erudição; era promover a educação moral, social, estética e científica do povo português; era estar nos centros fabris, perto das oficinas, nas aldeias, nos pequenos e grandes povoados, com o objetivo de “criar espíritos justos e livres”, despertar “sentimentos humanos, no amor à humanidade e à justiça, e os sentimentos sociais de liberdade, da igualdade e do direito”. A ideia de universidade livre tinha um triplo significado: “liberdade para a Universidade em relação ao poder religioso e ao poder político; liberdade para os professores de expor as suas doutrinas unicamente segundo as prescrições da ciência; e liberdade para o conselho de administração de reger a Universidade sem a intervenção dos poderes públicos” (Cortesão, apud Pita, 1989, p. 267).

⁶ Na Bélgica, na cidade de Bruxelas, foram implantadas ao menos três UPs: a Casa do Povo, a Schaerbeek e a Saint Gilles.

⁷ No Egito, a experiência mais destacada foi a da Universidade Popular Livre de Alexandria, que ministrava o currículo em diferentes línguas, concebido para uma sociedade multicultural. A UPL de Alexandria foi fundada por um núcleo anarquista, concebida de uma forma mais radical em termos políticos do que as similares italianas e francesas. Coerente com seus ideais, a UPL tinha como objetivo ser autônoma financeiramente e depender apenas das contribuições mensais dos seus membros. A



instituição estava aberta a todos, mas a sua missão educacional era promover a difusão da cultura científica e literária na classe popular. O currículo tinha uma forte ênfase na ciência e nos mais recentes avanços no conhecimento científico. As classes aconteciam todos os dias à noite para que os trabalhadores pudessem participar. Além dos cursos e palestras regulares, a UPL também era um centro cultural e um local de encontro, que propiciava uma sala de leitura e uma biblioteca, onde os visitantes podiam ler jornais locais e estrangeiros e pegar livros emprestados. Em 1902, a UPL publicou o seu próprio jornal, que incluía o material apresentado nas suas conferências. Performances musicais e teatrais também eram patrocinadas pela UPL. Todos os professores eram voluntários, ou seja, não recebiam para ensinar (Benzaquen, 2011).

Referências

- Arroyo, M. G. (2011). Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes.
- Beck U. (1992). Risk Society. Towards a new modernity. London: Sage Publications.
- Benzaquen, J. F. (2011). Universidades dos movimentos sociais: apostas em saberes, práticas e sujeitos descoloniais. Tese de Doutorado. Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra. Acesso em: www.ces.uc.pt. Recuperado em 31 de agosto de 2019.
- Chauí, M. (1999). Ideologia neoliberal e universidade. In: Oliveira, F; Paoli, M. C. (Org.). Os sentidos da democracia. Petrópolis: Vozes.
- _____. (2001). Escritos sobre a universidade. São Paulo: Unesp.
- Drucker, P. (1976). Uma Era de Descontinuidade: orientações para uma sociedade em mudança. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
- Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix: University, Industry, Government Innovation in Action. 2 ed. London: Routledge.
- Leydesdorff, L. (2006). The Knowledge-Based Economy. Chicago: Universal Publishers.
- Luz, D. L. P. (2018). Movimentos sociais e educação superior: a atuação do MST na promoção da justiça cognitiva. Dissertação (Dissertação de Mestrado em Educação) - Universidade Federal da Fronteira Sul, Santa Catarina.
- Martins, C. B. (2018). Universidade não pode virar refém de pautas políticas, diz sociólogo. São Paulo. Folha de S. Paulo. Caderno Ilustríssima. 19 ago. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/08/universidade-nao-pode- virar-refem-de-pautas-politicas-diz-sociologo.shtml>. Recuperado em 31 de agosto de 2019.



- Nierotka, R. L. (2015). Políticas de acesso e ações afirmativas na educação superior: a experiência da Universidade Federal da Fronteira Sul. 2015. 180 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Fronteira Sul. Chapecó, 2015.
- Osorio, A. R. (2006). As universidades populares: contexto e desenvolvimento de programas de formação de pessoas adultas. *Revista Lusófona de Educação*, N. 8, 2006. Disponível em: www.scielo.br. Recuperado em 31 de julho de 2019.
- O'Byrne, D; Bond, C. (2014). Back to the Future: the Idea of a University Revisited. *Journal of Higher Education Policy and Management*. V. 36. N. 6. p. 571-584.
- Palacios, L. M. (2002). Las universidades populares [http://www.filosofia.org/aut/lpm/index .htm](http://www.filosofia.org/aut/lpm/index.htm) acedido em março de 2011. Recuperado em 31 de agosto de 2019.
- Pita, A. P. (1989). O Poder de Saber. Competências e Cultura nas Universidades Republicanas de Educação Popular. *Revista Crítica de Ciências Sociais*. Nº 27/28. Coimbra, junho de 1989. Disponível em: <https://ces.uc.pt/pt/publicacoes/revista-critica-de-ciencias-sociais>. Recuperado em 31 de agosto de 2019.
- Raynaut, C. (2013). Os desafios contemporâneos da produção do conhecimento: o apelo para ID. In: Gauthier, F. O. et all. *Interdisciplinaridade. Teoria e prática*. V. 1. Florianópolis: UFSC/EGC.
- Santos, B. S. (1989). *Introdução a uma ciência pós-moderna*. Rio de Janeiro: Graal.
- _____. (2002). *A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência*. 4 ed. São Paulo: Cortez.
- _____. (2003). *Um discurso sobre as ciências*. São Paulo: Cortez.
- _____. (2004). *Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências* In: SANTOS, B. S. (Org.). *Conhecimento prudente para uma vida decente: 'um discurso sobre as ciências' revisitado*. Porto: Afrontamento.
- _____. (2005a). *A universidade no século XXI. Para uma reforma democrática e emancipatória da universidade*. 2 ed. São Paulo: Cortez.
- _____. (2005b). *O Fórum Social Mundial. Manual de uso*. Porto: Edições Afrontamento.
- Silva Júnior, J. R.; Sguissardi, V. (2011). *Novas faces da Educação Superior no Brasil. Reforma do Estado e mudanças na produção*. 2 ed. São Paulo: Cortez/UFFS- IFAN, 2001.
- Trevisol, J. V. (2014). *Movimentos sociais e universidade popular no Brasil: a experiência de implantação da UFFS*. X ANPED SUL, Florianópolis, outubro de 2014. Disponível em: http://xanpedsul.faed.udesc.br/arq_pdf/978-0.pdf.



_____. (2015). Movimentos Sociais e universidade popular no Brasil: a experiência de implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul. In: Almeida, M. de L. P.; Cattani, A. (Org.). Educação Superior Ibero-americana: uma análise para além das perspectivas mercadológicas da produção do conhecimento. 1ª ed. Buenos Aires: CLACSO, p. 155-169.

Trevisol, J.; Ló & M. A. (2014). *Educação e política: movimentos sociais e participação no processo de criação da UFFS*. Documentário. Formato DVD. Universidade Federal da Fronteira Sul: Chapecó.

Unesco. (2013). Toward Knowledge Societies. For Peace and sustainable development. Disponível em: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSI_10_Event/wsis10_outcomes_en.pdf. Recuperado em 31 de agosto de 2019.

Ward, S. C. (2014). *Neoliberalism and the Global Restructuring of Knowledge and Education*. London: Routledge.



Princípios filosóficos e pedagógicos que norteiam a formação educativa dos atores sociais no movimento dos trabalhadores rurais sem terra.

Paula Silva Janini

Resumo

O tema proposto para análise intenciona trazer ao centro da discussão um estudo sobre os “Princípios Filosóficos e Pedagógicos que Norteiam a Formação Educativa dos Atores Sociais no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST”. Por meio de tal proposta objetivamos entender como acontece essa educação e que mecanismos o movimento têm utilizado para concretizar a formação educativa de seus atores sociais na constituição de identificações para a organização de um novo tipo de sociedade, que priorize justiça social, valorize a diversidade e não apenas respeite ou tolere as diferenças, mas reconheça essas diferenças como constituidora das relações sociais na sociedade. No corpo do artigo procuramos identificar e discutir sob que princípios filosóficos e educacionais o movimento alicerça suas práticas e direcionam suas experiências históricas e de lutas, com a intencionalidade de tornar o ensino mais relevante aos estudantes. Para direcionar nossa discussão utilizaremos como aporte analítico o pensamento pós-estruturalista, fundamentando nossos estudos e reflexões na Teoria do Discurso na perspectiva de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe como opção de percurso teórico-metodológico. A título de conclusão apresentamos que apesar do MST investir em propostas para uma educação voltada para o campo, ainda há certa distância entre tais propostas, presente nos documentos, e o que é concretizado nas escolas dos assentamentos, principalmente nos tempos atuais com o crescimento e fortalecimento ideológico da direita conservadora no Brasil, sinalizando a marginalização e criminalização do movimento e o fechamento de suas escolas.

Palavras chave

Movimentos Sociais; Formação de Cidadãos; Transformação Social; Teoria do Discurso.

Introdução

O presente trabalho intenciona suscitar questões relativas à trajetória histórica dos movimentos sociais rurais no Brasil. Nossa discussão teórica realiza análises acerca da proposta educacional que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST apresenta como uma de suas principais demandas, os princípios sob os quais se



norteiam e as principais dificuldades que o movimento enfrenta para materializar essas propostas, tanto no campo da dimensão política como na sua tradução no campo da prática.

Conhecer a trajetória dos movimentos sociais rurais no Brasil, assim como seu crescimento e lutas para tornarem-se sujeitos políticos, faz-se necessário para tomarmos conhecimento da história do MST, desde sua gênese aos dias atuais, situando-nos histórica e politicamente em suas lutas e conquistas.

Este movimento busca realizar uma educação que seja voltada para realidade dos povos do campo. Com a pedagogia da terra, ensina através da realidade imediata dos indivíduos que fazem parte do movimento, mas sem deixar de oferecer-lhes uma visão macro da realidade, com conhecimentos políticos, econômicos, culturais...

O MST apresenta como um de seus principais projetos, uma educação de qualidade em seus assentamentos. Contemplando em seus princípios filosóficos e pedagógicos a relação entre a teoria e a prática, combinação de métodos de ensino, o educar para o trabalho e o vínculo entre educação e cultura para formação de uma sociedade que priorize os valores humanistas e socialistas na busca da transformação social.

Com o tema Democracia Radical buscamos discutir esse projeto político- social a partir da Teoria do Discurso na perspectiva de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2015), onde a importância de valorizar os dissensos e a dimensão antagônica presente nas relações sociais e humanas tornam-se condições necessárias para concretização desse projeto.

Nesse sentido, se torna imprescindível superar a convicção de uma sociedade como espaço suturado e fixo, na qual, os movimentos sociais contemporâneos – entre eles o MST, emerge como atores sociais que se articulam a partir de ações e identidades coletivas num processo gradativo de constituição de suas identidades políticas.

Movimentos sociais rurais no brasil

A luta dos pequenos agricultores por melhores condições econômicas e pelo bem-estar social, sempre esteve presente na história do Brasil. Por vezes, essa luta se mostrou muito forte, quando o povo parecia está bem organizado, em outras vezes, mostrou-se mais fraca devido à repressão causada pelos grandes proprietários de terra, trabalhando de forma incisiva para que a criação de leis e de programas pelo Estado - visando uma alteração na estrutura fundiária e agrícola para atender aos pequenos produtores rurais sem terra ou com pouca terra - não acontecesse.



Como nos explica Bergamasco (1996), o surgimento das manifestações camponesas no período pré-64¹ vem com o processo de democratização puxado pela eleição presidencial de 1945. Porém, poucas delas atuam de maneira a despertar interesses, expressando-se de forma isolada até 1954. A partir daí, ganham nova força com a nomenclatura "Ligas Camponesas", impulsionando novas formas de manifestações no campo.

Alguns destes movimentos, espalhados pelo país, conseguem estabelecer uma aliança com setores urbanos, ganhando força política e repercussão nacional, dando maior abrangência à questão da reforma agrária e unificando lutas isoladas. Os partidos políticos começam a reconhecer a relevância do tema e diversos projetos de lei são elaborados durante a década de 50 (Idem, 1999, p. 13).

Durante o golpe militar de 1964, essa forma de organização em luta pela reforma agrária e melhoria das condições de vida dos povos do campo foi duramente massacrada. Porém, essas repressões não conseguiram sufocar o espírito de luta do povo sem-terra por muito tempo e nem tão pouco controlar suas formas de luta, que passaram a acontecer em todo território brasileiro.

O sonho de trabalhar em suas próprias terras e romper com toda forma de dominação, aguçou o sentido da luta - colocar abaixo a cerca do latifúndio, dividir de forma humana a terra e começar a montar um projeto para todos aqueles que estão dispostos a lutar por melhores condições de vida passou a ser algo tangível, possível de alcançar.

Nesta época foi elaborado o Estatuto da Terra (Lei 4.504)² pelo governo militar, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da república em 30.11.1964, onde o mesmo fixava as diretrizes para que fossem implantados projetos de colonização em áreas de fronteira agrícola. Cabendo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrícola (INDA) a responsabilidade de encaminhar os projetos e ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) a aplicação da reforma agrária. Sendo esses dois institutos transformados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) nos anos 70, dando uma nova conotação a reforma agrária dentro do sistema político Brasileiro.

Neste contexto, início da década de 80, nasce então o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) construindo sua história e constituindo sua identidade enquanto movimento social que luta não apenas pela terra, mas também por educação do campo e por políticas públicas que garantam esse direito. Com isso, trazendo de



volta à agenda nacional lutas antigas em nosso país como a conquista da terra para dela extrair sua subsistência.

A intenção é mostrar que esses sujeitos vão além das estatísticas e que por suas peculiaridades (experiências e histórias de vida e de lutas, relações sociais) necessitam de uma educação que se identifique com seu perfil, sendo construída através da interpretação da realidade para poder transformá-la.

O MST como agente pedagógico

Como a luta no campo, a exploração e a exclusão dos trabalhadores rurais sempre foi uma realidade no Brasil, pensar a educação dentro nesse cenário é promover um vínculo entre projeto educativo com projeto político e social. Reforçando assim a ideia dos movimentos sociais como agentes educativos e constitutivos da formação do ser humano como ativo, crítico e capaz de construir um novo projeto de sociedade, transformando-se em sujeitos-autores³ de sua própria história.

A formação dos sem terra em relação à organização de estruturas mais complexas e sua participação num número cada vez maior de dimensões da vida social, firmam sua identidade de Sem Terra como sujeitos que lutam pelos seus direitos sociais e políticos de cidadão, entendimento formado a partir do reconhecimento de que “Terra é mais do que terra...”. Segundo Caldart:

Na prática constitui-se um dos sentidos importantes daquela expressão “terra é mais que terra”, entendendo que a terra conquistada na luta deixa de ser apenas terra, para ser terra com pessoas buscando encontrar o melhor jeito de trabalhar e de viver nela, o que exige a preocupação com um conjunto bem maior de dimensões humanas, e com um tipo de organização que dê conta delas (2004, p.136).

Dentro desses projetos, o MST propõe garantir o princípio educacional de extensão escolar ou universalização, reconstruindo a história de vida social das comunidades e cidadãos que vivem à margem do sistema capitalista, utilizando os saberes populares rejeitados na escola formal e o enriquecendo de sentido ao confrontá-lo com o saber escolarizado. É preciso pensar, que à educação é mais que a presença de grande parte da população na escola. É dar um novo olhar ao modo de educar e quem é o sujeito dessa educação e formando pessoas que se empenhem constantemente para conquista e manutenção deste direito.

O desdobramento necessário dessa preocupação do MST é, então, passar a considerar como tarefa central a formação das pessoas, exatamente na perspectiva de ajudá-las a



perceber conscientemente como pressionam as novas circunstâncias que criaram através de sua participação na luta e na sua identificação como Sem Terra. É importante começar a perceber a relação entre essa reflexão e o lugar ocupado pela educação e pela escola na dinâmica do MST (Idem, 2004, p.58).

Por meio desta educação libertadora⁴ é possível, segundo o MST, a constituição de um povo como sujeitos-autores, inclusive de suas próprias políticas públicas, estabelecendo um tipo de relação pedagógica entre educadores e educando devido à sistematização do saber produzido socialmente pelos movimentos sociais.

Porém a visão estreita e falta de compromisso nas políticas públicas sempre foram uma realidade na área educacional, tanto no campo como na cidade. Sendo esta pensada apenas como transmissão de saberes ou repasse dos comandos determinados pelo mercado e pela produção. Para a educação rural essa realidade foi ainda pior, pois esta, durante décadas foi subjugada e negligenciada pelo Estado. Essa visão pessimista do campo se refletia no pensamento de que só poderiam ter escolas de qualidade, professores qualificados e um currículo adequado a sua realidade, quando o próprio campo se modernizasse.

O MST enquanto Agente Pedagógico busca inverter essa visão reducionista da educação no campo, mostrando que este não está estagnado. O movimento intenciona relacionar a educação com realidade de seus integrantes, mostrando que escola é mais do que escola, preocupando-se com todas as questões da sociedade, das mais amplas as mais restritas e que o campo está vivo e reclamando a atenção da sociedade.

Princípios fundamentais em que o MST apóia suas práticas

O MST traz dentro de suas concepções enquanto movimento social dois princípios: *Princípios Filosóficos* e *Princípios Pedagógicos*. Ao tratar desses princípios o MST está pensando especialmente em suas práticas, pois considera a educação uma das dimensões da formação humana, tanto no sentido mais amplo quanto no mais restrito, para organização no conjunto de lutas dos trabalhadores e trabalhadoras. Considerando que este é um processo através do qual as pessoas se inserem na sociedade, transformando-se e transformando-a, por isso mesmo essa educação está ligada a um determinado projeto político e a uma concepção de mundo. Diante disso, Caldart nos diz que:

A reflexão aponta como o movimento pedagógico que forma os Sem Terra não cabe na escola, mas a inclui como uma dimensão cada vez mais importante, exigindo dela que volte a olhar-se como lugar de formação de sujeitos humanos, em um processo educativo



que fica mais rico quando se sabe que nem começa nem termina nele mesmo (2004, p.19).

Os princípios filosóficos do MST dizem respeito a sua visão de mundo, a concepção sobre o ser humano e a sociedade e ao que entendem que seja educação, visando objetivos mais estratégicos do trabalho educativo. Já os princípios pedagógicos se referem ao jeito de fazer e de pensar a educação para concretizar os princípios filosóficos. O MST considera a existência de práticas diferenciadas a partir dos mesmos princípios filosóficos e pedagógicos. A prática pedagógica que acontece em uma escola de ensino infantil é diferente da que acontece em uma escola de curso T.A.C. (Técnico em Administração de Cooperativas), por exemplo, mas os princípios em que se apoiam são os mesmos.

Diante disso, podemos compreender que segundo os princípios educacionais do MST:

Quanto mais nos esforçamos para pensar sobre nossas práticas e para estudar sobre outras práticas, mais conseguimos avançar na formulação de nossos princípios. E quanto mais avançarmos na formulação dos princípios, mais avançaremos na coerência de nossas práticas, construindo um sentido estratégico (com objetivos de longo prazo, com articulação entre as ações) para nosso trabalho e para o conjunto da nossa organização (Caderno de Educação nº 8, p.4).

Levando em consideração estes princípios, torna-se mais fácil compreender como historicamente se constituiu a questão da educação no movimento, relacionando-se a uma determinada concepção de escola, e desta maneira, apreender o sentido educativo do MST, enquanto movimento social com características próprias, determinadas e bem definidas dentro do contexto de sua luta principal que é a Reforma Agrária no Brasil. Para que o projeto educativo do MST tenha de fato consistência significativa, é preciso compreender a experiência mais ampla de formação humana dos indivíduos que fazem parte do movimento, dessa coletividade, desses novos sujeitos sociais, para que se possa entender então, o porquê da proposta de uma escola que possa se constituir como parte dessa experiência.

O MST, assim como tantos outros movimentos sociais tenta mudar os rumos da história, da sociedade e da própria vida de seus integrantes, tendo como luta central a questão da terra e sua distribuição com bases sociais mais justas. Para isso busca na educação um dos principais elos nessa conquista, que se sabe não ser fácil, nem rápida, mas que se persistente, realizável.



Princípios filosóficos

Os princípios filosóficos do MST apoiam-se em algumas características essenciais. A primeira delas é a Educação para transformação social, compreendendo-a como imprescindível para desenvolver a consciência revolucionária, tanto nos educandos e educandas como nos educadores e educadoras, defendendo como fundamental o direito de todos à educação nas suas diversas formas, construindo propostas que se desenvolvam ligadas as lutas, aos objetivos e a organicidade do movimento, participando assim, mais ativamente do processo de mudança.

A segunda característica é a Educação para o trabalho e a cooperação, onde esta deverá ser voltada para a realidade do meio rural, ajudando a solucionar seus problemas, construindo alternativas de permanência no campo com melhor qualidade de vida. E é neste ponto que a cooperação faz-se importante para organização coletiva do trabalho.

A terceira e a quarta características que são a Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana e a Educação com e para valores humanistas e socialistas, colocando então a pessoa humana e sua liberdade no centro do processo de transformação, mas não como indivíduos isolados e sim como sujeitos coletivos com igual participação de todos no processo.

Educação como um processo permanente de formação humana que se representa na quinta característica, acreditando que as pessoas mudam à medida que educam e são educadas, sendo um processo contínuo que só termina com a morte. Porém, o que educa de fato as pessoas não são apenas discursos, palavras ou teorias, por melhores que sejam, é preciso que haja uma vivência concreta dessa teoria, para que aconteça a transformação, construção de novos comportamentos, valores e atitudes. *“Não há revolução com verbalismos, nem tão pouco com ativismo, mas com práxis, portanto, com reflexão e ação incidindo sobre as estruturas a serem transformadas”* (Freire, 2005, p. 142).

Princípios pedagógicos

O MST tem em suas concepções diversos princípios pedagógicos, os quais julga essencial para educar os sujeitos, visando seu novo projeto de desenvolvimento social para o campo. Dentre esses princípios podemos elencar: relação entre a teoria e a prática dentro do processo pedagógico; conteúdos formativos socialmente úteis;



vincular os processos educativos com os políticos; gestão democrática e; criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores.

Relacionar prática e teoria nos processos pedagógicos em uma escola significa organizar o currículo em torno de situações que exijam respostas práticas dos estudantes, é aí o grande desafio metodológico deste princípio: aprender a articular o maior número de saberes diante de situações da realidade.

Quanto aos conteúdos formativos socialmente úteis, entende-se que não se parte do conhecimento conteudista. O conhecimento é construído a partir da problematização que se lança sobre a realidade. Por isso a importância de se trabalhar com temas geradores porque são questões, problemas da realidade que passam a ser estudado pela escola para que os alunos possam fazer uma leitura dessas questões da realidade.

Durante muito tempo tentou-se fazer acreditar que os processos educativos e políticos não deveriam se misturar. O MST rejeita por completo essa concepção, pois, considera a necessidade de um vínculo orgânico entre educação e política. Fazer a política adentrar nos processos pedagógicos é bem mais do que simplesmente conversar sobre questões políticas, é interferir nela, é canalizar os sentimentos de indignação para o despertar da necessidade de mudança, tanto na sociedade como em cada pessoa.

Ao que tange a gestão democrática, cabe o entendimento de que os educandos tenham um espaço e um tempo autônomo para se encontrar e discutir suas próprias questões, assim como, para tomarem decisões incluindo aquelas para verdadeira participação no coletivo maior de gestão da escola. E gestão democrática não se discute apenas com discurso, a prática pedagógica tem que inserir esses educandos nessas vivências. Por meio deste entendimento concordamos com Laclau e Mouffe (2015) quando colocam que o sentido do discurso envolve mais do que fala ou registros textuais, mas envolve também um sentido de ação, de prática, ou seja, expressar-se por meio da ação coletiva e apresentar-se como postura no contexto da ação.

A criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores é também um dos princípios pedagógicos sobre o qual o MST apoia sua prática educativa, entendendo que o trabalho de educação através de coletivos pedagógicos está ligado a outro princípio de igual importância, onde quem educa também precisa se educar continuamente. É preciso que educadores e educandos sejam despertados em suas atitudes e habilidades de pesquisa, não necessariamente aquelas pesquisas acadêmicas, mas a investigação e análise de realidade.



Principais dificuldades e conquistas na efetivação prática de seus princípios

Na maioria das vezes o MST encontra grandes dificuldades para efetivar seus princípios nas escolas dos assentamentos, pois entende que o que eles pretendem oferecer como uma educação de qualidade fica apenas no campo do discurso teórico devido à concepção que os educadores(as) que estão presentes nas escolas dos assentamentos têm sobre educação.

Um dos motivos que leva a esse acontecimento é que muitos dos profissionais que atuam nas escolas não são efetivos e quando muda o prefeito muda todo o quadro de funcionários. Outro motivo é que mesmo quando eles são efetivos ao passar o período probatório, depois de dois anos, eles são remanejados para outro lugar e aí o movimento tem que recomeçar com os educadores(as) novos, todo o processo. Os quais nem sempre se identificam com a pedagogia da educação do campo. Na maioria das vezes a resistência é encontrada nos próprios professores(as) em abraçar o sentido da luta, ocorrendo um choque de identificações.

Não há interesse no movimento em excluir os professores da rede pública de ensino desse processo, até porque é importantíssimo que eles compreendam o trabalho do movimento. Não é interessante que os princípios adotados fiquem apenas no campo, mas que possam se expandir.

Esses são os principais motivos que fazem com que a prática pedagógica do MST não aconteça em sua totalidade nas escolas do movimento. Uma educação que leve em consideração, prioritariamente seus princípios filosóficos e pedagógicos na formação de novos cidadãos críticos e participativos, atuando eficazmente em todos os setores da sociedade.

Esses princípios servem para direcionar o caminho que o movimento deve se pautar para tornar o ensino mais relevante aos estudantes sem terra. A implementação desses princípios vai se diferenciar em cada realidade, depender do momento histórica, da relação com as forças políticas, dos profissionais que atuam nas escolas dos assentamentos, das parcerias firmadas com outras instituições.

Assim, podemos elencar situações de formação dos quadros nacionais do MST para manter o espírito de luta vivo. Neste sentido podemos citar os cursos de formação filosófica (em articulação com a UFRJ) e sobre realidade brasileira (UFF) ou ainda, o curso de agronomia para jovens provenientes do Movimento (UFC). Também se faz necessário citarmos a formação de professores, em cursos de magistério promovido em



parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a superior de pedagogia, em parceria com a Universidade de Injuí (RS) e, desde 1999, um convênio com a Universidade de Campinas (SP), para cursos de férias voltados à formação política de jovens acampados e assentados, de 15 a 25 anos de idade.

Ainda no Estado de Pernambuco o Centro de formação Paulo Freire no Assentamento Normandia em Caruaru, que comporta cursos de formação para os dirigentes do movimento, assim como, espaço para realização dos encontros estaduais dos professores e monitores das escolas dos assentamentos. E neste centro ocorreram as aulas do Saberes da Terra - Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos Integrados com Qualidade Social e Profissional para Agricultores (as) Familiares.

Faz-se importante ressaltar que o centro de formação Paulo Freire direciona suas atividades para educação popular, formação de professores e coordenadores e em especial na tarefa fundamental de transição para agroecologia. Nesse espaço já foram formados mais de 1500 assentados/acampados em produção de alimentos saudáveis, realizando mais de 38 vezes o Curso Técnico de Práticas em Agroecologia. Desta forma, o movimento se apropria de um novo jeito de educação e formação dos sujeitos que compõe o movimento, com princípios pedagógicos próprios.

O centro de formação Paulo Freire foi fundado em 1999 e após seus 20 anos de existência e muito trabalho realizado, conforme elencado no parágrafo acima, sofre grande revés com a solicitação à justiça de reintegração de posse requerida pelo INCRA e aceita pelo juízo da vara federal de Caruaru, estando ameaçada toda uma constituição histórica de luta e resistência. Diante da atual conjuntura política, social, econômica e sobre tudo ideológica que governa o país, é possível que a requerida reintegração de posse do centro de formação Paulo Freire esteja mais fundamentada em disputas ideológicas do que propriamente em questões jurídicas. Ou seja, uma aparente utilização do âmbito jurídico para camuflar o campo ideológico. Processo no qual seu desfecho ainda é desconhecido, visto que a decisão do movimento é resistir e convocar a sociedade e as bases do movimento social na ajuda em defesa não apenas do centro de formação, mas em defesa da própria história dos homens, mulheres, jovens, crianças que fazem parte do MST e que também escrevem a história do país.

O valor da diferença na dimensão constitutiva das relações humanas

Sistemas com formas de governo que intencionem uma sociedade democrática que seja pacífica e harmoniosa, e que desprezam a importância do dissenso, para trabalhar a partir de um consenso imposto, terminam por contradizer o princípio fundamental da



própria democracia e tornam-se incapazes de perceber as diferenças e divergências que são próprias do mundo globalizado (Mouffe, 2003). Diferenças essas que se apresentam de forma marcante na constituição dos movimentos sociais.

[...] uma sociedade democrática dá oportunidade para a expressão de interesses e valores conflitantes. [...] uma democracia pluralista necessita oportunizar o dissenso e instituições através das quais ele possa se manifestar. Sua sobrevivência depende das identidades coletivas formadas em torno de posições claramente diferenciadas, assim como da possibilidade de escolha entre alternativas reais. (Mouffe, 2003, p. 17).

A prática de desprezar os dissensos em nome da ilusão de uma sociedade harmoniosa e sem conflitos, pensamento próprio do liberalismo democrático, prejudica a própria concepção de democracia, uma vez que silencia vozes e despreza diferenças, trazendo essas formas de exclusão disfarçadas sob a roupagem da racionalidade e moralidade. O MST sofre duramente com essa forma de pensamento fortemente marcada em diversos setores da sociedade, quando tentam marginalizá-los e criminalizá-los - rotulando trabalhadores de bandidos. Nessa forma de pensamento é possível identificar o desprezo pelo outro e pelas diferenças que nele consiste. O que podemos entender é que os contornos políticos da cidadania moderna foram construídos de forma universal e racional, impedindo o reconhecimento de divisões, diferenças e antagonismos⁵.

Aceitar o caráter contingente e radicalmente aberto dos valores sociais é condição primeira para o pensamento de uma sociedade radicalmente democrática (Laclau, 2015). A visão de cidadania radical e plural proposta por Laclau e Mouffe (2015) entende a cidadania como uma identidade política, que se identifica com princípios políticos da democracia moderna pluralista e na afirmação da liberdade e igualdade para todos.

Uma identidade política comprometida com a diversidade que constitui as relações sociais não se estabelece em apenas tolerar diferenças, mas apreendê-las de forma positiva, reconhecendo que sem alteridade, nenhuma identidade pode se firmar. Essas identidades, vinculadas umas as outras por uma identificação comum, através de um conjunto de valores ético-político, reconhecem neles – nos valores - uma real condição de possibilidade de uma vida democrática. Desta forma, cidadania não pode ser entendida apenas como uma identidade entre tantas outras, mas como um princípio articulador das diferentes posições dos sujeitos e do respeito às liberdades individuais.

Tal pluralismo está ancorado no reconhecimento da multiplicidade de cada um e das posições contraditórias a que esta multiplicidade subjaz. Sua aceitação do outro não consiste meramente em tolerar as diferenças, mas em celebrá-las positivamente porque



admite que, sem alteridade e o outro, nenhuma identidade poderia se afirmar. Este é um pluralismo que valoriza a diversidade e o dissenso e não tenta estabelecer uma esfera pública a partir da sua eliminação, uma vez que reconhece neles a real condição da possibilidade de uma vida democrática a ser conquistada (Mouffe, 2003, p. 19).

A partir da concepção de democracia radical, os autores chamam atenção para uma condição necessária à democracia, a aceitação do outro e as diferenças que nele consistem. As diferenças são elementos positivos que constituem as relações sociais e por esse motivo precisam ser respeitadas e valorizadas, para que as identidades possam ser constituídas. Uma democracia estabelecida sob o pilar de aparente consenso carrega em seu cerne traços de exclusão e silenciamento que impedem a instauração de uma democracia plena. Conhecer, reconhecer, e aceitar as diferenças é condição primeira para realização de um projeto democrático.

Uma sociedade radicalmente democrática emerge das lutas que são sobredeterminadas⁶. Desta forma o campo do conflito social não se concentra em um agente privilegiado da mudança social, mas se estende, radicalizando as lutas democráticas e apontando para impossibilidade de uma sociedade transparente e homogênea. As identificações políticas produzidas se desenvolvem a partir de determinadas decisões e escolhas, mas precisa de um ponto de partida, uma identificação com um processo de representação, uma constituição da vontade através da identificação (Laclau, 2013).

Considerações

Diante das discussões desenvolvidas ao longo deste trabalho de pesquisa é possível compreendermos que a principal intenção do MST em adotar os princípios educativos anteriormente apresentados – Princípios filosóficos e pedagógicos - é vivenciar uma pedagogia que seja própria do movimento e que se junte a diversas pedagogias. De modo especial, alinhe-se com a pedagogia da *luta social*, a *pedagogia da terra* e a *pedagogia da história*, de forma que cada uma ajude produzir traços na identidade dos povos do campo, suas místicas e seus projetos de futuro (Caldart, 2001, p.129).

Todos os aspectos aqui levantados serviram como reflexão para entendermos se é ou não possível o MST - tomado por seus princípios filosóficos e pedagógicos -, materializar seu projeto de formar cidadãos para um novo tipo de sociedade. Nas propostas presentes nos documentos há um interessante embasamento teórico e uma grande preocupação com a sua vinculação junto à realidade dos povos do campo, porém ainda



existe muita dificuldade na aplicação desses princípios, o que impede o alcance desses objetivos de forma mais ampla.

Uma característica importante dos sujeitos Sem Terra e que não pode deixar de ser aqui mencionada, é a conscientização de coletividade. Ao entrar para o movimento o indivíduo perde sua identidade como individual e passa a ser coletivo. Isso não significa dizer que suas particularidades são eliminadas, mas sim que são suspensas temporariamente para que um discurso unificador possa se fortalecer e agregar suas principais demandas.

A educação dos sem-terra do MST começa com o seu enraizamento em uma coletividade, que não nega o seu passado, mas projeta um futuro que eles mesmos poderão ajudar a construir. Saber que não está mais solto no mundo é a primeira condição de a pessoa se abrir para esta nova experiência de vida. Este costuma ser o sentimento que diminui o medo em uma ocupação, ou que faz enfrentar a fome em um acampamento (Caldart, 2001, p.221).

É preciso lutar por uma educação que projete uma ordem social diferente e que tenha força suficiente de sair dos documentos, ultrapasse o campo teórico e consolide-se na prática, garantindo, ao menos, condições elementares de sobrevivência dos seres humanos e sua afirmação como pessoas que existem e participam da sociedade a qual se encontram inseridas. Para esse acontecimento, a educação em toda sua dimensão é absolutamente crucial na realização deste propósito. Porém só há de realizar-se:

Quando situamos a escola no horizonte dos direitos, temos de lembrar que os direitos representam sujeitos – sujeitos de direitos, não direitos abstratos -, que a escola, a educação básica tem de se propor tratar o homem, a mulher, a criança, o jovem do campo como sujeito de direitos. Como sujeitos de história, de lutas, como sujeitos de intervenção, como alguém que constrói, que está participando de um projeto social. Por isso a escola tem de levar em conta a história de cada educando e das lutas do campo (Arroyo, 2004, p. 74).

É nesse sentido que buscamos, a partir da concepção de democracia radical, pensadas por Laclau e Moufe, chegar a um entendimento mais consistente de como se desenvolvem as relações político-sociais no seio do Estado moderno, e a busca de um novo entendimento de democracia para superação das desigualdades produzidas por uma democracia que silencia vozes e despreza as diferenças, em nome de uma racionalidade, moralidade e falsa harmonia social.



Como podemos observar o MST se apresenta como uma identidade coletiva e que vai se articulando de dentro do movimento – porque tomam como ponto de partida sua própria realidade -, para fora – mostrando pra sociedade que são atores sociais vivos e desejam ser autores de sua própria educação e de sua própria história -, que se estabeleça como um resultado e não como algo imposto ou pré-construído.

Notas

¹ Entende-se como o período que antecedeu o golpe militar de 31 de março de 1964 e implantou a ditadura militar no Brasil que durou 21 anos.

² Lei nº 4504 de 30 de novembro de 1964 dispõe sobre o estatuto da terra e da outras providências. Em seu Art. 1º regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução de reforma agrária e promoção da política agrícola.

³ Faremos uso da expressão sempre que desejarmos fazer menção à sujeitos dinâmicos que desejam e lutam para incidir na formulação de políticas públicas, tornando-se autores de sua educação e de sua história.

⁴ Uma educação conscientizadora que contribua na aprendizagem da democracia com a própria existência dela. Daí a necessidade de uma educação corajosa, segundo Paulo Freire (1999). FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. 23ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

⁵ É uma relação negativa em que certa identidade tem sua existência negada por outra identidade no sentido absoluto do termo. Uma idéia que pressupõe a incapacidade da completude identitária, marcado por uma constante luta por posições e recursos de poder e de reconhecimento. Ao mesmo tempo em que, o discurso antagônico nega a existência do outro, ele a constitui e da mesma forma que o antagonismo é a condição de impossibilidade de determinado discurso ele é a sua própria condição de possibilidade, porque no contexto da Teoria do Discurso, não há discurso político que se constitua senão negativamente num primeiro momento. Ver Daniel de Mendonça – Pensando (c)om Laclau) os limites da Democracia.

⁶ O conceito de Sobredeterminação nega e mostra a impossibilidade de um conceito como determinação em última instância, afirmando o caráter precário e relacional de toda identidade. Assim como, a impossibilidade do objeto “sociedade” como uma totalidade racionalmente unificada. Ver Laclau e Mouffe, 2015. Ou seja, a ideia de que o próprio social não possui um sentido final, determinista, apontando para infinitas possibilidades de significações, permeadas por relações precárias e contingentes.



Referências

Arroyo, Miguel Gonzales; Caldart, Roseli Salete; Molina, Mônica Castagna. (organizadores). *Por Uma Educação do Campo*. Rio de Janeiro: Vozes, 2004.

Bergamasco, Sônia Maria; Norder, Luiz Antônio Cabello. *O que são assentamentos rurais*. São Paulo: Brasiliense, 1996.

Caldart, Roseli Salete. *Pedagogia do Movimento Sem Terra*. 3ª edição. São Paulo: Expressão Popular, 2004.

_____. *O MST e a formação dos sem terra: o movimento social como princípio educativo*. Artigo. Estudos Avançados, 2001.

Coletivo Nacional do Setor de Educação. *Educação de Jovens e Adultos: Caderno de Educação nº 11*. Veranópolis, 2005.

Freire, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

Laclau, Ernesto (1935-2014); Mouffe, Chantal. *Hegemonia e estratégia socialista: por uma política democrática radical*. / Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Tradução de Joanildo A. Burity, Josias de Paula Jr. e Aécio Amaral – São Paulo: Intermeios; Brasília: CNPq, 2015. (Coleção Contrassensos).

_____. *A razão populista: tradução Carlos Eugênio Marcondes de Moura*. – São Paulo: Três Estrelas, 2013. Título original: *On populist reason*.

Mouffe, Chantal. Democracia, cidadania e a questão do pluralismo. *Política e Sociedade*, nº 03, p. 11- 26, Outubro, 2003.



Movimentos sociais e educação do campo: Reflexões sobre reforma agrária popular.

Railson Borges Lima¹
Kelci Anne Pereira²
Alane Borges Lima³

Resumo

O artigo busca responder à seguinte questão: qual o papel dos movimentos sociais na construção da educação do campo, no Brasil e particularmente no sul do Piauí, e na formação dos povos camponeses? Para tanto descrevemos as lutas históricas de tais movimentos, destacando o surgimento da pauta educativa em suas ações e, como parte dela, a pauta da produção agroecológica. Conceituamos e analisamos os movimentos sociais camponeses como ações coletivas coordenadas para a transformação social e consolidação da reforma agrária popular, que entram na luta social revelando as contradições da questão agrária brasileira. A educação do campo é uma práxis formativa orientada à emancipação dos trabalhadores do campo, tendo como matrizes formativas a luta, a memória, a cultura e a história, e como princípios educativos o trabalho, a mística e a auto-organização. A partir de uma metodologia qualitativa, envolvendo entrevistas com lideranças do Movimento Estudantil de Educação do Campo e da Comissão Pastoral da Terra, concluindo-se que os movimentos cumpriram e cumprem um papel crucial de restauração do direito educativo aos povos camponeses, qualificando o campo como local de vida e trabalho, além de serem eles próprios sujeitos educadores coletivos. No entanto, este acúmulo democrático está cabalmente em risco na área de fronteira agrícola do sul do Piauí, em decorrência da atuação do agronegócio na região, que disputa permanentemente a terra e os meios da produção camponesa, promovendo um desmonte dos territórios camponeses, da educação e das escolas do campo junto às comunidades rurais.

Palavras chave

Movimentos Sociais; Educação do Campo; Reforma Agrária Popular; Emancipação; Piauí.

Introdução

No presente estudo focalizamos a realidade do Piauí, no Brasil, particularmente o sul do estado, onde conflitos entre capital e trabalho no campo mostram-se bastante agudos, impedindo ou dificultando a reprodução social dos povos e comunidades camponeses.



No coração deste conflito está a disputa permanente dos meios de produção e da terra pelo agronegócio, que atua sistematicamente expropriando os camponeses piauienses tanto para destinar as terras para o plantio de commodities (soja) quanto para a especulação imobiliária. No tocante à especulação, destaca-se como agente de aquecimento do mercado de terras nesta região os fundos de pensão internacionais, que ao lado de famílias da oligarquia nacional e de empresas produtoras, atuam violando os direitos humanos dos povos e comunidades do cerrado (bioma local). Nestas violações é bastante comum o expediente de falsificação de títulos de propriedade, conhecido como grilagem de terras (Oliveira, 2016).

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Piauí ocupa uma área territorial de 251.616,823 km² e 12, 40 hab/km², sendo a 24^o posição no ranking de desenvolvimento do PIB no país e no IDH com uma faixa de 0,646 e na educação a 18^o a posição no ranking de desenvolvimento do IDEB no país. No entanto, percebe-se que o PIB das cidades do sul do Piauí é descompensado em relação ao IDH, possuindo uma distorção de péssima qualidade de vida, pois quanto mais sobe o PIB cai a qualidade de vida (Favaretto, 2019). Essa relação proporcional entre crescimento econômico e crescimento da desigualdade demonstra que o projeto de desenvolvimento do agronegócio é tendencioso para beneficiar a burguesia local e internacional e consolida uma característica marcante na formação social do Brasil, que é o vínculo entre acumulação de terras e acumulação de poder.

Essa condição histórica produz muitos conflitos e ao mesmo coloca como exigência permanente ao campesinato a auto-organização e a luta social, aqui chamada de resistência camponesa.

No âmbito desta resistência, tivemos vários episódios de luta na nossa história: algumas ligadas outras a processos sindicais, outras a ação coletiva de movimentos sociais camponeses, etc; lutas essas que precisam ser entendidos como práticas plurais que e constituem a materialidade de origem da educação do campo.

Destacam-se dois processos importantes nessas lutas históricas: a organização das Ligas Camponesas na década de 1950 no Brasil, suprimida pela ditadura civil militar, e o processo de redemocratização do país associado ao surgimento do MST (Movimento dos trabalhadores rurais sem-terra) e retomada da ação sindical da COTANG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), associada ao nascimento de outros movimentos sociais. Movimentos estes que vão para a cena pública mostrar



as inconsistências da proposta de reforma agrária do Estado, que é inacabada e de mercado e favorece a expansão do capitalismo no campo (o agronegócio).

Dentro desses movimentos populares e nos territórios que eles conquistam, surge uma nova proposta de reforma agrária de caráter popular, diferente da proposta pautada pela a burguesia e encampada pelo o Estado. Nesta proposta reforma agrária não consiste apenas na redistribuição de terras, mas sobretudo na garantia de direitos que permitam aos camponeses sua reprodução social no campo, o bem viver das comunidades, e a constituição do poder popular dos camponeses articulados a outros setores da classe trabalhadora até o ponto de incidência sobre as esferas de governo e governança.

No limite, os movimentos camponeses afirmam que a reforma agrária popular não consegue se dar plenamente no capitalismo, apontando-se para uma necessidade de mudança mais radical do sistema social. Assim, a reforma agrária popular “consiste na distribuição massiva de terras a camponeses, no contexto de processos de mudanças de poder nos quais se constituiu uma aliança entre governos de natureza popular, nacionalista, e os camponeses” (Stedile, 2012).

No âmbito da acumulação de forças para a consolidação da reforma agrária popular, os movimentos camponeses disputam um espaço na agenda política nacional para dizer que modelo de educação querem para suas bases e seu povo não é o modelo pensado e controlado pela burguesia, não é o modelo que ampara o desenvolvimento do agronegócio. O modelo de educação defendido pelos camponeses é o da educação do campo, um tipo de educação emancipatória, que emana e se estrutura, em sua forma e conteúdo, visando o protagonismo e a emancipação dos sujeitos educadores e educandos; entre esses sujeitos educadores, destaca-se o próprio movimento social e entre os princípios pedagógicos da educação do campo, toma corpo e evidência o trabalho, a cultura, a pesquisa e a luta. Defender o povo como educador do povo não significa eximir o Estado de sua responsabilidade pública para com a educação.

Neste contexto é que os movimentos camponeses lutaram pela criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, em 1998. Sobre o surgimento do Pronera (Santos, 2012) compreende “num contexto de ascenso da luta pela Reforma Agrária que aliava as condições de forte organização e mobilização dos Sem Terra” [...], e vai evoluindo pra se transformar numa política pública. Nesta evolução, o Pronera se amplia do MST e da Contag e passa a ser abraçado pelo o conjunto dos movimentos, apoiado pelas universidades, dando substância e motivação para o surgimento do movimento nacional por uma educação básica do campo.



Com essa soma de vinte anos de construção da Educação do Campo dentro dessa perspectiva de uma práxis formativa para além do capital, a educação do campo se consolidou como método de educação popular de forma articulada com os movimentos sociais potencializando a luta em defesa da reforma agrária e, nela, a defesa da agroecologia, que vai além de uma matriz produtiva ecológica e envolve modos de vida e existência camponeses.

Frente a este contexto nos perguntamos: qual a contribuição dos movimentos sociais na construção da educação do campo, no Brasil e particularmente no Piauí, na formação dos camponeses? A fim de responder a esta pergunta temos como objetivo identificar a forma e objetivos da ação educativa dos movimentos, observar os impactos dessa atuação na formação dos camponeses, perceber as relações entre a ação educativa dos movimentos e a construção da práxis da educação do campo, na perspectiva da reforma agrária popular.

Metodologia

Utilizamos de uma metodologia qualitativa, que se apresenta como estudo exploratório da Educação do Campo no Piauí, do ponto de vista da ação coletiva dos sujeitos hoje organizados no Fórum Piauiense de Educação do Campo - FOPEC. Neste contexto do Fopec, nos valem de entrevistas com o Movimento Estudantil de Educação do Campo (MEEC) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) que possuem atuação no sul do PI. Utilizamos ainda observações durante o Seminário dos 20 anos do Pronera e da Educação do Campo no Piauí, que ocorreu em agosto de 2019 no município de Teresina/PI. O Meeec e a CPT são organizações atuantes no debate sobre a territorialização da educação do campo e do campesinato no Piauí.

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) surge em 1975 por intermédio da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, na urgência de defender os direitos dos povos amazônicos e logo se expandiu para outras regiões do Brasil. Em cada região o trabalho da pastoral adquiriu tonalidades diferentes, de acordo com os desafios que a realidade local colocava. A CPT se define como um organismo pastoral, ecumênico, vinculado à Igreja Católica, particularmente à teologia da libertação, e desenvolve sua ação junto aos homens e mulheres do campo em toda a sua diversidade, com atenção especial para os submetidos a condições análogas ao trabalho escravo. (CANUTO, 2012).

No caso do Movimento Estudantil de Educação do Campo, se inicia no Brasil com a criação dos cursos superiores em Educação do Campo nas universidades no ano de 2010, especificamente nas regiões sul e sudeste do país. No Piauí, ele surge em 2014



quando a Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC) foi implantada em 4 (quatro) campus da Universidade Federal do Piauí (Picos, Floriano, Bom Jesus e Teresina), proporcionando a inclusão de mais 800 (oitocentos) jovens agricultores/as, quilombolas, descendentes de indígenas no ensino superior nas universidades públicas, fato nunca visto na história educacional desse Estado.

As práticas do MEEC perpassam a luta contra o fechamento de escolas do campo (expediente usado pelo agronegócio junto ao Estado para expulsar os povos do campo), compreendendo a educação emancipatória como direito essencial à condição humana, incompatível como a ideia da educação como mercadoria!

Durante esses cinco anos de existência das LEdoC's no Piauí houve dois momentos que proporcionaram o encontro de estudantes: o I e II Encontro Estadual de Estudantes da Licenciatura em Educação do Campo – EDUCAMPO. Esses momentos foram oportunos e se fazem necessários por ocasião dos vários desafios que apontam a conjuntura sociopolítica brasileira, bem como as dificuldades e entraves que a licenciatura vem passando ao caracterizarem-se como um projeto contra-hegemônico nas ainda etilistas universidades brasileiras.

A Licenciatura em Educação do Campo – LEdoC é uma política educacional que vem oportunizando a centenas de jovens piauienses, residentes no campo, o acesso ao ensino superior e graças os últimos períodos a organização estudantil têm se articulado e resistido para manter-se dentro desse espaço de direito, a universidade.

As observações realizadas no seminário do Pronera foram compostas por momentos de análise da conjuntura, debates, rodas de conversa e audiência pública realizada na assembleia legislativa do Piauí, onde se discutiu sobre as bases materiais de formação e os avanços e perspectivas de futuro para a Educação do Campo no contexto da política educacional atual.

Questão agrária e reforma agrária popular

A questão agrária no Brasil tem raízes na colonização, quando os portugueses chegam e invadem o território brasileiro, expulsando, expropriando e aniquilando os povos tradicionais (indígenas) que aqui habitavam. Essa herança colonial sempre foi marcada por concentração de poder nas mãos de grandes latifundiários, impedindo aos povos do campo o acesso à terra.

De acordo com Oliveira (2001), com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível através da compra/venda, o que limitava ou mesmo praticamente impedia



o acesso à terra para os escravos que foram sendo libertos com a abolição da escravatura em 1888.

Neste contexto de trabalho liberto e terra cativa é que o estatuto da terra foi criado em 1964, como a primeira legislação referente à reforma agrária no Brasil. O Estatuto registra em seu § 1º, art. 2º, que a propriedade da terra está condicionada ao desempenho integral da sua função social (*op. cit.*, 1979, p. 25).

A constituição federal de 1988 destaca nos seus art. 184 e 186 que:

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei (...).

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei (...)

Há cinquenta anos o governo brasileiro criou o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), por meio do decreto de nº 1 110 de 9 de julho de 1970, com o objetivo de promover a reforma agrária. No entanto, este instituto não necessariamente consolida o marco constitucional e o Estatuto da Terra. Para que as terras improdutivas ou que não cumprem sua função social sejam destinadas à reforma agrária, historicamente, os camponeses precisam lutar organizadamente.

Pontuamos aqui algumas conquistas que são frutos das lutas e articulações, anteriores e posteriores ao processo de redemocratização do país, como por exemplo: a criação da associação brasileira de reforma agrária – (ABRA-1967), a organização da campanha nacional pela a reforma agrária – (CNRA-1983-1994), o fórum nacional pela a reforma agrária e justiça no campo – (FNRA-1980), e posteriormente a intensificação das ocupações de terra, lideradas pelo o movimento dos trabalhadores rurais sem-terra – MST.

Após as pressões populares, a exemplo da Marcha Nacional por Reforma Agrária Emprego e Justiça, ocorrida em 1997, e das ocupações, o governo brasileiro de Fernando Henrique Cardoso regulamentou os artigos da constituição, promulgando a Lei da Reforma Agrária de nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

Com a garantia dessas leis, houve na década de 90 o fortalecimento dos movimentos sociais em seus diversos campos de atuação, especificamente na educação e na luta



pelo o acesso à terra, no marco do que se chamou reforma agrária popular. Construída a partir da tensa relação entre Estado e movimentos sociais, a reforma agrária popular tem como objetivo criar processos de mudanças sociais que constituíssem leis de reforma agrária popular.

Movimentos sociais camponeses

Conceituamos e analisamos os movimentos sociais camponeses como ações coletivas coordenadas para a transformação social e consolidação da reforma agrária popular, que entram na luta social revelando as contradições da questão agrária brasileira. Os movimentos se movem diante de uma herança histórica colonial que se perpetua a realidade da questão agrária no Brasil, que é marcada pela a concentração de poder. Historicamente esses movimentos vêm construindo diversas estratégias de formação e organização de seus grupos, por meio de núcleos de base (familiares ou não), com objetivo de fortalecer suas frentes de atuação e intercalando novas categorias de análises, centrado na definição de promover ações educativas coletivas, favorecendo a organização da população para expressar suas demandas. E nesse sentido, estabelecendo uma relação dialógica de formação humana e social, que revela uma grande transformação na vida dos sujeitos pertencentes.

As contradições, lutas e desafios dos movimentos sociais no Brasil possui como marco o avanço da sociedade capitalista globalizada e informatizada, que está diretamente ligado à suas práticas sociais coletivas, que se consolidaram através da construção de redes, em contraposição ao novo processo de reconfiguração da sociedade brasileira, que se iniciou com a industrialização da agricultura na revolução verde ocorrida na década de 1950, trazendo uma concentração e acumulação de riquezas expressas na política de monopolização do capital.

Essa articulação por redes constituiu novas formas de relação de trabalho, especificamente na construção crítica e militante dos movimentos e, conseqüentemente, o surgimento de uma Educação do Campo, que nasce no seio desses movimentos. Neste contexto, a educação do campo se conceitua como fenômeno histórico da realidade, de luta pela terra, numa práxis emancipatória e política da pedagogia socialista e da alternância, objetivando dar voz e sentido à luta dos povos, quando lutavam por um novo projeto popular de sociedade, de produção agroecológica, respeito com o meio ambiente e a vida.



Educação do campo

A educação do campo é uma práxis formativa que surgiu no Brasil a partir da luta dos movimentos sociais camponeses pela educação e que se orienta à emancipação dos trabalhadores do campo. Sob tal perspectiva educacional, a luta, a memória, a cultura e a história são matrizes educativas da educação do campo, desdobradas nos seguintes princípios educativos: o trabalho, a cultura, a pesquisa, a luta e a auto-organização.

Caldart (2012) expõe três teorias que fundamenta os princípios e métodos dessa concepção de educação: pedagogia do oprimido, que preceitua uma práxis libertadora e problematiza a realidade mediante o processo de humanização; a pedagogia socialista, que por vez apresenta o trabalho como princípio educativo, socialmente útil justo e necessário na vida de cada sujeito; e pôr fim a pedagogia dos movimentos, que forma e articula a luta coletiva, garantindo a resistência e a produção da existência da vida com dignidade.

Cumprir destacar como marco histórico na educação do campo o surgimento do Pronera, tendo como pano de fundo a materialidade da questão agrária descrita anteriormente. Trata-se de uma política educacional que regulamenta em termos constitucionais um novo projeto de educação popular, fundamentado na parceria entre estado, movimentos sociais e instituições públicas escolares de nível básico, médio, técnico e superior.

Nesse contexto, a reprodução da vida nos assentamentos e comunidades camponesas após a implantação do Pronera passa pelo aparelho cultural da escola ligada à vida. Com isso, os movimentos sociais começam a assumir um papel crucial pela a restauração do direito à educação, colocando na pauta educativa, o direito de receber educação no lugar em que vive e se trabalha, podendo este mesmo administrar o seu tempo de estudo, conciliando com a sua rotina de trabalho e produção.

A educação do campo, no contexto dos movimentos sociais é contida na relação de reciprocidade com a terra e os meios de produção, que qualifica o campo como local de vida e trabalho, servindo como parâmetro para solucionar esse distanciamento entre instituições públicas escolares e comunidade.

Tendo resultado das lutas dos próprios movimentos sociais e sua práxis como sujeito coletivo educador, em consonância com educadores(as) que almejavam atender tais demandas, numa perspectiva crítica e emancipatória.



Assim, a Educação do Campo atua por meio do processo de formação, para elevação do nível de consciência e emancipação dos camponeses, podendo tornar esses sujeitos conhecedores dos seus direitos, para continuar produzindo a existência dentro do território, mediante o desenvolvimento de práticas agroecológicas e de ressignificação cultural como instrumento de resistência.

Apesar de no Brasil a experiência e a oferta da Educação do Campo ter se iniciado muito antes da institucionalização do Pronera, ainda por volta da década de 1970 por meio das Escolas Famílias Agrícolas-EFA's, fundamentadas na pedagogia da alternância, tendo como oferta o ensino médio, foi somente a partir da regulamentação da Educação do Campo por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB de 1996, que os movimentos sociais do campo conseguem construir o movimento por uma educação básica do campo, que faz nascer a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em 1998 na cidade de Luzilândia-GO.

A partir da força e organização desse movimento, já no ano de 2002 surge as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo.

[...] definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país.[...] (Diretrizes, Art. 2º, Parágrafo único).

A educação do campo ganha maior fôlego quando ela chegar nas universidades, quando houve a criação do Programa Nacional de Apoio a Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo – PROCAMPO em 2007, e posteriormente em 2011 a criação do PRONACAMPO – Programa Nacional de Educação do Campo. “A partir de então é possível garantir que essa educação volte ao campo de forma contextualizada, na linguagem e realidade dos povos e comunidades camponeses” (Arroyo, Caldart e Molina 2004).

Nesses termos, fica evidente que a universidade desenvolve um importante papel enquanto instituição de ensino para a formação crítica e militante dos camponeses, favorecendo que esses sujeitos tenham um olhar da conjuntura a partir de outro ângulo da realidade, colocando a luta como elemento de alteração da correlação de forças.



Resultados e Discussões

A forma e objetivos da ação educativa da Comissão Pastoral da Terra é condicionada pela busca do direito das comunidades camponesas à educação vinculada a sua realidade, ou seja, uma formação que esteja em conformidade com seus modos de vida. Particularmente no Piauí, sobretudo no sul do estado, percebe-se uma crescente atuação da CPT nos processos de territorialização da Educação do Campo, trabalhando em parceria com universidade, escolas do campo e comunidades camponesas. Nesse processo, jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino superior em idade regular passam a adentrar nesse espaço acadêmico e terem seus direitos correspondidos.

Nesse processo de atuação, o acompanhamento e o trabalho de base desenvolvido pela a CPT junto as comunidades camponesas e assentamentos da região é reafirmado: 1) nos seus processos coletivos de conquista dos direitos e da terra, de resistência na terra e de produção sustentável (familiar, ecológica, apropriada às diversidades regionais); 2º) nos seus processos de formação integral e permanente, a partir das experiências e no esforço de sistematizá-las com forte acento nas motivações, valores, mística e espiritualidade; 3º) na divulgação de suas vitórias e no combate as injustiças, sempre contribuindo para articular as iniciativas dos povos da terra e das águas e buscando envolver toda a comunidade cristã e a sociedade, na luta pela terra. Tendo uma presença solidária, profética, ecumênica, fraterna e afetiva, que presta um serviço educativo e transformador junto aos povos camponeses, para estimular e reforçar seu protagonismo. (Coordenador da CPT).

No caso do Movimento Estudantil no estado do Piauí, uma das bandeiras de luta é atuar contra o fechamento das escolas do campo, partindo do pressuposto que esta é uma alternativa viável para permanência dos jovens no campo e além de constituir como espaço de auto-organização das comunidades e construção de processos coletivos, através da partilha e reflexão das experiências vivenciadas e do acesso ao conhecimento (científico, filosófico e artístico). Outra forma de atuação ou ação educativa do movimento é debater os desafios dos discentes e futuros educadores/as da educação do campo, mediante os processos de auto-organização e realização de encontros estudantis, de modo a qualificar a proposta do Curso da Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal do Piauí.

Portanto, a promoção dessas ações de luta parte não só da necessidade de garantir políticas públicas de permanência, mas, sobretudo, da criação de leis que garantam a inserção desses/as educadores/as no mercado de trabalho e possibilite um



reconhecimento da formação desses educadores do campo por parte do governo do estado.

Nesse sentido, percebemos que os impactos da atuação desses movimentos na formação dos povos camponeses é visível, quando se colocam a tarefa de ajudar a construir um projeto, um sistema de educação que valorize os povos do campo, a particularidade dos camponeses; uma política pública de produção com a matriz agroecológica. Nesse sentido, segundo os entrevistados, particularmente no Piauí, eles têm buscado incidir sobre a política de educação para que os camponeses não precisem sair do campo para ir às periferias urbanas estudar.

No contexto da reforma agrária popular, as relações entre a ação educativa dos movimentos e a construção da práxis formativa da Educação do Campo são realizadas a partir da materialização dos modos de vida, da garantia da autonomia e emancipação individual e coletiva dos sujeitos para ir em busca de seus direitos, bem como da vivência de cada sujeito dentro das instituições de ensino, o que a faz tornar uma educação de caráter popular.

Por fim, percebe-se como desafio a dificuldade dos movimentos se inserirem dentro das universidades, pelo o fato de serem instituições de ensino engessadas, para tanto, necessita-se que tais instituições tenham uma abertura maior para/com esses movimentos. Um outro desafio enfrentado é de: como que os sujeitos que estão hoje dentro da universidade constrói movimentos nos seus espaços? Devendo entender que esse espaço formativo da educação do campo não é só para formar profissionais, mas para formar sujeitos de direito que compreenda o seu papel social.

Considerações finais

Em linhas gerais, a atuação e as lutas travadas por esses movimentos, buscam promover a construção da agricultura e formas de vida camponesas, a educação, a dignidade dos povos do campo, a reforma agrária, a distribuição de terra gratuita pra quem dela precisa, pra quem nela trabalha, pra quem nela produz com dignidade, a valorização do meio ambiente, da natureza, nossas águas, rios, florestas etc. Fazer com que o campo seja protagonista na produção de uma vida saudável, de um alimento livre da transgenia, que seja orgânico e agroecológico.

Para tanto, os movimentos sociais estudados partem do princípio de que a reforma agrária popular não está reduzida a terra, precisa-se discutir condições básicas do bem viver das comunidades, garantindo a emancipação, ou seja, a condição de autonomia



na vida dos sujeitos camponeses, mediante a construção de processos educativos popular, tornando-os livres, sendo capazes de perceber as contradições existentes na sua realidade. Assim é evidente que os movimentos cumpriram e cumprem um papel crucial de restauração do direito educativo aos povos camponeses, qualificando o campo como local de vida e trabalho, além de serem eles próprios sujeitos educadores coletivos.

Frente aos objetivos de perceber a forma e objetivos da ação educativa dos movimentos na sua relação com a práxis formativa da Educação do Campo, constatamos que os mesmo contribuíram e contribuem constantemente na construção da Educação do Campo, ao se apresentarem como movimentos populares e proporem um projeto de educação que está em constante diálogo com o modo de vida dos camponeses educandos e educadores e que respeita a diversidade de saberes do campesinato, proporcionando uma luta coletiva em defesa da reforma agrária popular e fomentando a agroecologia como instrumento potencializador dessa diversidade social e cultural.

Notas

¹ *railsonborges122@outlook.com*

² *kelciperreira@gmail.com*

³ *allaneborgeslima@hotmail.com*

Referências

Arroyo, M. G. & Caldart, R. S. Molina, M. C. (2004). (orgs.) Por uma Educação do Campo. Petrópolis: Vozes.

Canuto, A. (2012). Dicionário da Educação do Campo. In: Comissão Pastoral da Terra (CPT). São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular.

CNE. Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Resolução n. 1, de 3 de abril de 2002, Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.

Favareto, A. Nakagawa, L. Kleeb, S. Seifer, P. & Pó, M. (2019). Há mais pobreza e desigualdade do que bem-estar e riqueza nos municípios do Matopiba. Revista Nera n.º. 50. Presidente Prudente, 2019. Disponível em: <http://revista.fct.unesp.br/index.php/nera>.

Oliveira, A. U. (2001). A agricultura camponesa no Brasil. 4. ed. São Paulo: Contexto, Geografia).



Santos, C. A. (2012). Dicionário da Educação do Campo. In: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular.

Stedile, J. P. (2012). Dicionário da Educação do Campo. In: Reforma Agrária. São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular.



Sistematización de análisis de coyuntura política en salud como forma de enseñanza sobre el escenario neofascista en Brasil.

Águilas Mendes
Leonardo Carnut
Daniele Correia

Resumen

Se objetivó analizar la organización del análisis de coyuntura política en salud como forma de enseñanza sobre el escenario sociopolítico neofascista en Brasil. Con el ascenso del conservadurismo y con la elección de candidato que representa este avance, se piensa en qué formas de enfrentamiento concretas pueden ser realizadas para organización de colectivos con base en la educación y en el diálogo con adeptos de la nueva derecha en Brasil. Se trató de un estudio cualitativo, a través de la metodología de sistematización de experiencias descrita por Oscar Holliday. Se realizó la observación directa de dos secciones de análisis de coyuntura política hecha por el Colectivo Formación Política en Salud; bajo una perspectiva marxista. Además, se hizo un análisis de contenido para sistematizar las deliberaciones de los documentos síntesis de las dos secciones. Se identificaron las principales formas de enfrentamiento relatadas por el grupo: formación, medios, humor y arte, redes sociales y vivencia comunitaria. En el análisis de las subjetividades para el diálogo, se identificaron los siguientes grupos a) masas: antipetismo y bolsonarismo, volátiles y con raíces en el neofascismo; b) clase media: oscurantismo y ostentación del discurso de odio, c) vanguardia: negación de la autocrítica, liderazgos pocos activos, con actitud inercial y capturadas por el pánico y d) izquierda radical: cautela y prudencia, realiza autocrítica y analiza más precisamente los cambios. Por último, este estudio permitió identificar cómo el análisis de coyuntura enseña a identificar el lugar neofascista emergente y sus posibilidades de enfrentamiento en salud.

Palabras clave

Acción; Política; Salud; Coyuntura; Enseñanza.

Introducción

El sector de la salud no es un campo homogéneo, está compuesto por varios subgrupos. La parte que es mayoritaria está alineada con la lógica del mercado capitalista, y el grupo minoritario, compuesto por sanitaristas son aquellos que constituyen el campo de la Salud Colectiva.



Este último campo considera la salud como un proceso socialmente determinado y por eso ve el proceso salud-enfermedad como un proceso subsumido por las condiciones materiales y objetivas de las determinaciones sociales, es decir, la forma en que viven las poblaciones. Desde una perspectiva de totalidad, se considera que la coyuntura económica y política corrobora estas determinaciones, lo que requiere que los análisis del campo de la Salud Colectiva consideren los contextos políticos, económicos y culturales que tejen la sociedad.

Una revisión de la producción científica sobre análisis coyuntural con la contribución del análisis de políticas de salud (Virgens, Teixeira, 2018) no identificó un marco común en los análisis de coyuntura en el campo de la salud, aunque el marco marxista sea el más citado. Con respecto a la ruta metodológica, Virgens y Teixeira (2018) identificaron en los artículos del sector Salud la relación entre las dimensiones sectoriales y otras de la coyuntura, y, en realidad, pocos profundizan estas conexiones. Sin embargo, es evidente que para desarrollar este tipo de enfoque aplicado al 'análisis político en salud', es necesario observar una producción teórica amplia que discuta 'el poder', 'el político', 'los actores / sujetos' y 'el acción'.

Además, los autores afirman que el análisis de la coyuntura es extremadamente importante para los estudios de 'análisis político en salud', sin embargo, es necesario que no se descuiden los aspectos teóricos y metodológicos, considerando la naturaleza del tema, los posibles cortes, las teorías desencadenadas y los procedimientos adoptados, con el fin de alcanzar una comprensión adecuada de la compleja totalidad en la que se sumergen los hechos y procesos históricos tomados como objeto de estos análisis (Virgens, Teixeira, 2018).

Con este fin, un colectivo brasileño llamado 'Forma(acción) es política', que reúne a trabajadores, académicos y estudiantes en el campo de la salud colectiva con el apoyo marxista, preocupados por el surgimiento del neofascismo en Brasil representado por la elección de Jair Bolsonaro para presidencia del país, se reunió para discutir los efectos, anteriormente considerados perjudiciales, para el sector de la salud.

Identificamos que este ascenso al neofascismo como consecuencia de la crisis política experimentada en 2016, expresada en el golpe parlamentario, legal y mediático derrocó la presidenta elegida democráticamente Dilma Roussef. Este hecho histórico fue objeto de un esfuerzo pedagógico para la repolitización de los sanitarios y de todas las categorías de trabajadores dedicados a la construcción y resistencia de la existencia del Sistema Único de Salud (SUS) (Santos, Szwako, 2016). Además, la propuesta era



prever las acciones políticas que consolidarían las contrarreformas en las políticas sociales, que destacan la salud.

Partimos del análisis de que la comprensión de la política, especialmente en el contexto de la gestión de la salud pública, dió paso a la idea de 'conformación estatal de normas y reglas' (SCHRAIBER, 1999; PAIM.; TEIXEIRA, 2006) que, una perspectiva de análisis más totalizante de la política a través de análisis de coyuntura no ha sido la forma más utilizada para conocer la realidad en salud. No es casualidad que el significado del término 'política' en salud pública se haya reducido a la idea de 'política pública'. (Souza, 2006; Harto-De-Vera, 2006; Rua, 2009; Coelho, 2009)

De hecho, el presente análisis de coyuntura realizado por el colectivo apunta a un análisis y sistematización que va más allá de los límites de los sectores, de la epidemiología y de la micropolítica en el campo de la salud, entendiendo que las interpretaciones actuales del golpe están alineadas con las narrativas explicativas meramente institucionales, por lo tanto vinculado al proyecto de neodesarrollo de los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Por lo tanto, el esfuerzo se centró en comprender los procesos sociopolíticos experimentados en América Latina y sus consecuencias y expresiones en Brasil.

Método

Sistematizando la experiencia del análisis de la coyuntura como una forma de enseñanza-aprendizaje sobre el escenario neofascista

El informe de experiencia que se describirá es una investigación cualitativa de un proceso de análisis de coyuntura (SOUZA, 1996) que propone sistematizar la experiencia de un colectivo de trabajadores de la salud sobre la lectura sociológica del período pre y post elección del presidente Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal - PSL) en octubre de 2017. Para la organización metodológica de este informe de experiencia se basó en la propuesta de Oscar Jara Holliday (2006). La sistematización comprende cinco momentos: 1) el punto de partida, 2) las preguntas iniciales, 3) la recuperación del proceso vivido, 4) la reflexión de fondo y 5) los puntos finales.

Momento 1: El punto de partida

La metodología de sistematización de experiencias propuesta por Holliday (2006) se basa en la concepción metodológica dialéctica. Este método se eligió porque las investigaciones cualitativas sociales y pedagógicas que tienen como objetivo producir conocimiento de una manera democrática y colectiva tienen la premisa de que la



práctica de la investigación debe estar 'con' seres humanos, no 'en' seres humanos, y por lo tanto, la sistematización de la experiencia se presenta como un método importante de esta manera.

Así, la sistematización de experiencias en el campo de la enseñanza del análisis de la coyuntura político-social presenta algunas ventajas que dialogan con la idea de mejorar las prácticas, es decir, en el sentido de la transformación en general, ya sea individual o colectivamente. La sistematización alienta a los sujetos a adquirir a lo largo de este camino el hábito reflexivo sobre sus acciones en función de la coyuntura, así como a generar prácticas más conscientes a partir de la lectura crítica de la realidad.

Momento 2: Las preguntas iniciales

El objetivo de la sistematización de los análisis de la coyuntura era reflejar: ¿en qué medida los análisis de la coyuntura política fueron realizados por las formas de enseñanza colectiva elaboradas sobre el escenario sociopolítico neofascista en Brasil? Para iniciar una respuesta a esta pregunta, reunimos los datos y las notas de las discusiones grupales, organizándolas para que no 'perdamos el enfoque' y al mismo tiempo para ayudar a avanzar los intereses del grupo. Es decir, reconocer dialécticamente si su práctica de análisis está sirviendo para avanzar al colectivo en la comprensión de la coyuntura.

Según Altamira y Canarias (2003), la concepción metodológica dialéctica es una forma de concebir la realidad, abordarla para conocerla y actuar sobre ella para transformarla. Por eso, para comprender mejor el papel pedagógico del análisis coyuntural en la realidad concreta, la articulación entre la teoría y la práctica es esencial.

Momento 3: La recuperación del proceso vivido

Los análisis de la coyuntura se llevaron a cabo en dos momentos diferentes, una en la preelección y otra en la postelección del presidente Jair Bolsonaro. A estos dos momentos asistieron 14 trabajadores de salud / estudiantes que, además de su educación y trabajo diario en el mundo del trabajo, también actúan como moderadores y facilitadores del Curso de Formación Política en Salud de la Asociación de Salud Pública de São Paulo (APSP), en la ciudad de São Paulo, Brasil. Este curso se ha convertido en una forma de reunir fuerzas para unificar a la clase trabajadora de la salud al comprender que la educación política es esencial, así como tenerla como su elemento de transformación.



Este grupo de trabajadores se reunió en la APSP en dos ocasiones presidenciales preelectorales (septiembre) y postelectorales (diciembre) del candidato Jair Bolsonaro en 2018, para llevar a cabo el proceso de análisis de la coyuntura política del escenario social brasileño a través del método de análisis político que combina la perspectiva de Peloso (2012) y Souza (2016) para instigar la reflexión y la formación pedagógica necesarias para este momento de la acción política de este colectivo.

A continuación, se enumeró los elementos de un análisis de coyuntura de acuerdo con esta mezcla. La primera forma metodológica utilizada fue la organización secuencial definida por Peloso (2012) que considera el análisis de la coyuntura como un 'trabajo base' y, por lo tanto, formativo de los trabajadores en cuestión. Así, se trabajó la secuencia indicada por el autor: a) asociación esencial / mítica; b) presentación de objetivos, c) presentación de obsequios, d) presentación de puntos a discutir, e) aprobación de propuestas, f) asignación de tareas, g) derivación del secretario a las conclusiones finales, h) evaluación de la reunión, i) programación de la próxima reunión y, j) cierre de la reunión.

Desde el punto de vista específico de la etapa de 'presentación de los puntos a discutir', se refería específicamente al análisis de la coyuntura en sí. Fue en este momento que los análisis se enviaron de acuerdo con Souza (2016) en la siguiente sistematización: a) eventos, b) escenarios, c) actores, d) relación de fuerza y e) coyuntura y relación con la estructura.

Desde el punto de vista de la dimensión pedagógica instituida por este proceso de análisis colectivo, el flujo de información se organizó entre los participantes a través del Método de la Rueda, apostando por su potencial pedagógico como lo señalaron D'Ascenzi y Lima (2013). Estos autores explican que este método ayuda en presencia de una educación continua basada en la socialización del conocimiento de los diferentes segmentos y sus diferentes perspectivas, facilitando el diálogo debido a la horizontalización del proceso analítico.

En este caso, las secciones se orientaron a través del repertorio experiencial de cada espacio de trabajo de los miembros del colectivo (concreción de la práctica) y el repertorio teórico en el que cada uno vislumbró el tema (reflexión sobre la aparición del fenómeno).



Momento 4: La reflexión de fondo

El análisis de la coyuntura política del sector salud se realizó con base en algunos elementos teóricos marxistas para garantizar la perspectiva de la totalidad y avanzar en el análisis de la coyuntura tradicionalmente realizada en el sector salud. A pesar de su discurso se decir marxista, pero desde el punto de vista metodológico, se reproducen prácticas de segmentación del conocimiento propias de otros paradigmas de interpretación (Virgens, Teixeira, 2018).

Por lo tanto, los supuestos elegidos en esta intención fue ir más allá de los análisis tradicionales, así se tomó que 1) la crisis política que la Salud Colectiva intenta analizar es mucho más profunda que una crisis del 'juego político' (Costa Pinto et al, 2016); 2) que la crisis experimentada en Brasil no es solamente dada por los 'diseños institucionales', sino principalmente por el proceso de acumulación de capital que se manifiesta en la dinámica del bloque de poder y sus rebotes en la escena política (Teixeira, 2016); 3) lo que nos interesa es revivir en la memoria de la Salud Colectiva la fragilidad y subordinación del Estado a la lógica del patrón de acumulación capitalista (Vianna, 2011; Teixeira, Costa Pinto, 2012); y 4) los intereses económicos de la burguesía y sus fracciones son siempre 'el horizonte' en el proceso de toma de decisiones en lo que respecta a los derechos, especialmente los derechos sociales (Alves, 2017). Sobre la base de estos supuestos, se construyó lo que puede entenderse como un análisis de (contra) coyuntura del escenario político experimentado.

Momento 5: Puntos de llegada

Los resultados se presentan a continuación en la sesión de Resultados y Discusión. Finalmente, vale la pena mencionar que debido a que esta investigación pedagógica corresponde a un informe de experiencia, a partir de los aspectos más destacados que los participantes enumeraron en los textos, no hubo necesidad de que el estudio pasara por procesos éticos.

Resultados y Discusión

El primer análisis

En la primera reunión celebrada en septiembre de 2018, por lo tanto, en la víspera de la primera vuelta de las elecciones presidenciales para 2019-2022, el tónico principal impregnado en la discusión fue el miedo que prevaleció entre los temas de izquierda sobre la intolerancia, la violencia simbólica y la violencia física. Estas represiones, que ya se anunciaron en la vida cotidiana de la sociedad brasileña con la adhesión ideológica a la propuesta del gobierno de Jair Bolsonaro, se figura en un parlamentario de extrema



derecha con pautas ultra conservadoras que decidieron sobre reducir la edad de criminalidad y regular la posesión de armas.

El candidato Jair Bolsonaro es el representante legítimo de la facción burguesa reaccionaria conservadora. Aboga por la privatización de todas las agencias estatales y ataca directamente el gasto público como la seguridad social, la agricultura subsidiada y la educación. Fomenta la entrega de reservas nacionales a la burguesía rentista internacional bajo la difusión de un discurso prejuicioso cuya idea de 'segregación' actúa como un sello para la violencia desenfrenada del Estado y la eliminación de aquellos que no tendrían derecho a la existencia. Ataca constantemente la garantía de los derechos sociales y la seguridad social. Entre las principales ofensivas al derecho a la salud, sus medidas no consideran el impacto social de las formas de vivir, enfermarse y morir del financiamiento del SUS a través de la Enmienda Constitucional 95. Su propuesta es frágil y descontextualizada, ya que se limita a la solución típica del mercado: racionalización, contención de costos y privatización del SUS. Se sabe que el 75% de la población brasileña se sirve principalmente en el SUS. Privatizar este patrimonio sería una 'política contraria al interés social'.

Tal conservadurismo surgió en la superficie mientras que el antipetismo y el golpe de Estado se esbozaron mucho antes de que se creara el impedimento de Dilma Rouseff, basándose en el uso de aparatos de hegemonía privados para construir una división de pro y contra petismo, asociando exclusivamente el Partido de los Trabajadores (PT) a las prácticas de corrupción.

El primer discurso de un compañero señaló en este sentido, advirtiendo que sería necesario tener mucho cuidado con la firma de documentos que expresen posiciones políticas, además de tener protección en cuanto a las publicaciones en redes sociales de naturaleza político-ideológica, ya que se presenta la censura de afiliación izquierdista en el país. También se afirmó que las prácticas organizativas deberían, más que nunca, llevarse a cabo sin espontaneidad, es decir, en grupos y de manera institucionalmente protegida. Para el compañero, hay un largo trabajo por delante, y la formación política es parte de ello, por lo que se sugirió atraer a más personas y reunirse con más frecuencia en este colectivo. Considera que el lugar de la acción política se convierte en grupos colectivos y confiables.

Con este fin, el papel de la formación crítica como contribución a la organización política es explícito, ya que los procesos apuntan a la necesidad de que las fuerzas políticas conscientes y organizadas estén en sintonía con la reacción de las masas y compartan



entre ellos la responsabilidad de llevar a cabo las tareas como tales. O sea, una sola organización, preparada de antemano para la continuidad con seguridad física y presencia de organización política (Bogo, 2011).

La siguiente declaración de otra compañera cita una recomendación de que se ha viralizado en las redes sociales sobre evitar publicar en las redes sociales, no participar en discusiones provocativas y criticar con cautela. Esta recomendación tenía la intención de contribuir al sentido crítico del pensador conservador que quizás estaba siendo manipulado en el proceso electoral.

Ciertamente, el uso de noticias falsas influyó en el resultado de las elecciones. En un país donde las disparidades sociales y económicas afectan a la mayoría de la clase trabajadora, otro aspecto está relacionado con la crisis educativa, que no es una crisis, sino un programa (Ribeiro, 1986) de la derecha. Hemos visto los efectos nocivos que son expresiones de la incipiente lectura interpretativa y el análisis histórico-crítico, enfriando el reclamo y el potencial revolucionario de la población brasileña. La universidad pública es el objetivo de este programa.

Después otro compañero recuerda que además de los espacios colectivos, los espacios de unión también deben ser ocupados, en un esfuerzo por apaciguar las diferencias del campo izquierdo. La intención es unirnos más allá de las categorías profesionales, es decir, esencialmente como una clase trabajadora. Cita su lugar de trabajo de una universidad federal en Sao Paulo y nos cuenta cómo los maestros están en el centro de la criminalización, especialmente porque son considerados marxistas y que incluso los propios estudiantes están asustados.

La compañera también habló sobre la situación de la izquierda. Para ella, la derrota estratégica de la izquierda se ha consolidado, dado que: el petismo está derrotado y el comunismo (como ideología) está derrotado. En este contexto de crecimiento de las acciones neofascistas, que se basa en prejuicios étnicos, religiosos, sexuales y de género, raciales, políticos, culturales, económicos y sociales / geográficos (localización), reprimiendo a la clase trabajadora, un amplio anillo de alianzas debe ser hecho. Así, contener tácticas y estrategias que tengan en cuenta las reacciones materiales y subjetivas de la gran masa, cooptada moral e ideológicamente por el ascenso de las iglesias neopentecostales a la escena política brasileña debe ser pensado.



El segundo análisis

En una segunda reunión, a la que ya asistieron ocho miembros del colectivo y, en el momento de después de la elección de Jair Bolsonaro, se realizó un segundo análisis de la coyuntura en un intento de volver a aprender el proceso y volver a analizar el escenario dibujando perspectivas para el año que viene.

Uno de los compañeros recordó que cuando se trabajaba en el análisis de la coyuntura en la experiencia de otros grupos del colectivo, era necesario dibujar tres momentos de análisis: el pasado, el presente y lo que se espera del futuro. En este sentido, el compañero presentó que, para la situación postelectoral, lo que seguramente fue un pasado, en el que el ciclo petista había terminado, un presente en el que surgió el neofascismo, específicamente en Brasil, con la ranciedad neoconservadora para construir, y en el futuro habrá un cambio en el régimen político a la luz de las contribuciones de los 'derivacionistas' y la Teoría del Estado Materialista (PACHUKANIS, 2017; HIRSCH, 2017).

Este escenario de cambio de régimen se estableció a la luz de las lecciones históricas aportadas por Mathias y Salama (1983) que revelan el alcance de la intervención estatal en los países dependientes y las razones para la multiplicación de regímenes de legitimidad restringida (dictaduras civiles y militares) en los países latinoamericanos. Es por eso que en este análisis de la coyuntura, la relación del pasado-presente-futuro ayuda a revelar la coyuntura experimentada por este colectivo, y por lo tanto la acción política debe tener cuidado con la espontaneidad y apaciguar las diferencias de la izquierda con la ayuda de una conversación cuerpo a cuerpo y formación de frentes y grupos.

Otro compañero respalda que el papel de sensibilizar a las personas, especialmente aquellos que ven la formación política, es esencial porque están detrás de esta conexión (coyuntura con la estructura) y que en el sector de la salud rara vez se hace de manera crítica. Otro compañero agrega que las personas abandonan las formaciones políticas con ganas de saber qué hacer y necesitan instrucciones para continuar las luchas o reanudar otras de las que ya formaban parte. Por lo tanto, un compañero analizó que es necesario esperar de los colegas lo que aportan de la síntesis sobre la situación de la coyuntura vivida para una buena conexión, evitando los 'saltos analíticos' sin la mediación adecuada, porque esto puede alejar a los compañeros que vienen a tomar el curso. Por ejemplo, la afirmación de que el pasado del PT ha terminado puede ser



problemático para algunos compañeros en este momento, una afirmación que debe hacerse a través de variadas mediaciones.

Por lo tanto, se recordó que el Curso de Formación Política en Salud realizado por el Colectivo 'Forma(acción) es Política', ya ha capacitado a alrededor de 350 trabajadores, a la luz de la perspectiva crítica y emancipadora de la política, y por lo tanto su responsabilidad de hacer que los trabajadores comprendan el núcleo de la política viene se consolidando. El proceso electoral brasileño en el que el candidato, Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) fue elegido es crítico y este fenómeno no se despega de la crisis capitalista en el mundo, que, como en Brasil, se sumó a una escalada del neofascismo, arruinando cualquier posibilidad de vivir con la democracia burguesa, incluso entender que este tipo de democracia es limitada, y que apenas bajo una intensa lucha política se permite la coexistencia con los derechos sociales en general y el derecho a la salud, en particular con este tipo de ultraconservadurismo.

Entre las referencias señaladas por el grupo, algunos militantes hicieron las siguientes propuestas para enfrentar la coyuntura analizada: formación, medios, humor / arte, redes sociales, experiencia comunitaria, acoger a personas sin ilusión alguna, hacer videos, rueda de conversación colectiva y usar manuales de orientación docente en el aula, así como ampliar nuestra formación política antifascista.

Consideraciones finales

Esta organización de análisis de políticas de salud ha demostrado cómo el uso del método de análisis puede servir como una forma de enseñanza y aprendizaje sobre escenarios sociopolíticos como en el caso del grupo estudiado.

El método permitió a los miembros del colectivo ir más allá de los límites de los sectores, la epidemiología y la micropolítica en el campo de la salud, deconstruyendo estas narrativas y reconectando el sector de la salud con la totalidad del modo de producción capitalista revelando el escenario electoral vivido más allá de las explicaciones meramente institucionales.

Además de servir a la organización política, este esfuerzo tiene un potencial pedagógico para enseñar a los militantes a comprender los procesos sociopolíticos que experimentan y también a tomar decisiones colectivas sobre los caminos de acción política que deben enfrentar.

Referencias

Altamira, F., Canarias, E. (2003). La sistematización de experiencias en el Sur y en el Norte: ¿iguales o diferentes? el proceso del grupo de trabajo de voluntariado de la



Congde, Bilbao. Acesso em: 02, mar 2019. Disponível em: http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0712/6_INC_SIS.pdf.

Alves, G. (2017). Reforma trabalhista, modernização catastrófica e miséria da república brasileira. Disponível em: <http://controversia.com.br/3390>, Acesso em: 28, ago, 2017.

Bogo, A. (2011). Organização Política e Política de Quadros. São Paulo: Expressão Popular.

Coelho, R.C. (2009). O público e o privado na gestão pública. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB. 78p.

Costa Pinto, E. et al. (2016). A economia política dos governos Dilma: acumulação, bloco no poder e crise. Instituto de Economia – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Textos para Discussão. Acessado em 1, agosto 2017. Disponível em: http://www.ie.ufrj.br/imagens/pesquisa/publicacoes/discussao/2016/TD_IE_004_2016_COSTA_PINTO_et_al.pdf.

D'ascenzi, L., Lima, L. L. (2013). Análise da implementação do método da roda no sistema de saúde de campinas. SP. Sociais e Humanas, Santa Maria, v. 26, n. 01, p. 67-78.

Harto-de-Vera, F. (2006). Ciencia política y teoría política contemporáneas: una relación problemática. Madrid: Editorial Trotta. 244p.

Hirsch, J. (2017). Elementos para uma teoria materialista del estado. In: Bonnet, A., Piva, A. (compiladores). Estado y Capital: el debate alemán sobre la derivación del Estado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Herramienta.

Holliday, O. J. (2006). Para sistematizar experiências. 2. ed., revista – Brasília: MMA. Acesso em 19, fev, 2019. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/168/_publicacao/168_publicacao30012009115508.pdf.

Mathias, G., Salama, P. (1983). O Estado superdesenvolvido: ensaios sobre a intervenção estatal e sobre as formas de dominação no capitalismo contemporâneo. São Paulo: Editora Brasiliense.

Pachukanis, É. (2017). A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). São Paulo: Sundermann.

Paim, J.S., Teixeira, C.F. (2006). Política, planejamento e gestão em saúde: um balanço do estado da arte. Rev Saúde Pública, São Paulo, v. 40, n. esp, p. 73-8.

Peloso, R. (2012). Trabalho de base: seleção de roteiros selecionados pelo Cepis. São Paulo: Expressão Popular.

Ribeiro, D. (1986). Sobre o óbvio. Rio de Janeiro: Guanabara.



Rua, M.G. (2009). Políticas públicas. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB. 166p.

Santos, F., Szwako, J. (2016). Da ruptura à reconstrução democrática no Brasil. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 40, n. esp., p. 114-121.

Schraiber, L.B. et al. (1999). Planejamento, gestão e avaliação em saúde: identificando problemas. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 221-242.

Souza, C. (2006). Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, v. 8, n. 16, p. 20-45.

Teixeira, R. A., Costa Pinto, E. (2012). A economia política dos governos FHC, Lula e Dilma: dominância financeira, bloco no poder e desenvolvimento econômico. Economia e Sociedade, Campinas, v. 21, Número Especial, p. 909-941, dez.

Vianna, L. W. (2011). A modernização sem o moderno: análises de conjuntura na era Lula. Rio de Janeiro: Contraponto.



Turismo de base comunitaria y justicia ambiental en pueblos originarios.

María Daniela Torres-Alruiz
Christian Martínez N.
Marisela Pilquimán V.

Resumen

Las iniciativas de Turismo de Base Comunitaria (TBC) se fundamentan en la propiedad y control que ejercen las comunidades locales sobre la actividad turística y su compromiso con la sustentabilidad social, ambiental y cultural. En Chile, existen iniciativas de TBC desarrolladas y promovidas por actores mapuche, que habitan territorios en conflicto y con injusticias ambientales. En este trabajo nos preguntamos si es posible afirmar que el TBC promueve Justicia Ambiental (JA) y de ser así, cómo lo hace. Para responderla se evalúa cualitativamente el papel que este tipo de turismo, concebido como táctica política por estas comunidades, tiene para promover JA. Se encuentra que el TBC puede detonar procesos de politización al promover la equidad en la distribución de beneficios sociales, culturales y económicos, así como la justicia distributiva y participación directa de los actores indígenas en las actividades turísticas, todos factores vinculados a la justicia ambiental.

Palabras clave

Turismo de Base Comunitaria; Justicia ambiental; Pueblos originarios.

Introducción

Evaluar prácticas turísticas en comunidades indígenas que habitan el sur global desde una perspectiva de justicia ambiental (JA) es un desafío. En primer lugar porque tanto la incorporación de esta temática a los estudios sobre el turismo es reciente y escasa (Lee y Jamal, 2008). Segundo, porque en América Latina la investigación en torno a JA puede considerarse emergente (Moreno-Jiménez, Cañada-Torrecilla, Vidal-Domínguez, Palacios-García y Martínez-Suárez, 2018) y a su vez, no comparte las mismas hipótesis, supuestos, y tendencias que son familiares para los activistas y académicos de los Estados Unidos y países industrializados (Carruthers, 2008). Tercero, la noción de JA es compleja y plural, con un discurso que se ha construido desde nociones occidentales de justicia y acuñados en países industrializados. Por ello, en el caso de estudios de grupos étnicos, es necesario integrar aspectos de interés para las propias comunidades locales, respetando la diversidad cultural, experiencias de colonización, capacidades de gobierno y diferentes estatus políticos (Whyte, 2010; 2011). Cuarto, la estructura,



dinámica y restricciones del turismo indígena difiere entre cada país de América Latina. Esto no sólo por las particularidades de la relación de cada Estado con los pueblos originarios que habitan los territorios, sino porque existen numerosas etnias, diferentes lenguajes y cosmovisiones (Pereiro, 2016).

Para el caso del pueblo mapuche y el estado chileno, las luchas históricas por reivindicaciones territoriales, derechos políticos, culturales y espirituales, también se plantean asociadas a la protección de las economías tradicionales y del medio ambiente ante amenazas diversas como, disposición de residuos tóxicos, sólidos y vertederos, construcción de infraestructura, cultivo de salmón, etc. (Schlosberg y Carruthers, 2010). Esto sucede en el marco de procesos de crecimiento económico desarrollados desde un extractivismo neoliberal, que da continuidad a las lógicas de la desposesión experimentadas desde la colonia (Nahuelpan, 2012; Cuadra Montoya, 2014). A su vez, existe un nivel de conflictividad social y territorial creciente (Delamaza, Maillet y Martínez, 2017), que también evidencia diversas situaciones de injusticia ambiental. Por ejemplo, distribuciones inequitativas de los costos ambientales dentro de la sociedad y los territorios, la ausencia de reconocimiento de la identidad de comunidades indígenas, la falta de acceso a instancias públicas de participación en la toma de decisiones que afectan la calidad de vida y una marcada ausencia de valorización de la integridad de los ecosistemas (Herve Espejo, 2010).

Es en este contexto que el turismo de base comunitaria se ha posicionado en el imaginario de las comunidades mapuche, como una acción de supervivencia y resistencia donde converge: la cosmovisión, la revalorización de prácticas culturales y la generación de oportunidades económicas (Ruiz-Ballesteros, 2010; 2017; Ruiz-Ballesteros y Hernández, 2010; Grimm y Sampaio, 2011; Pasa Gómez, Cavalcanti y Gómez Castillo, 2015; Pilquimán, 2016; 2017; Oehmichen y De la Maza, 2019). Concebido como táctica política la evidencia indica que los actores organizados en torno al TBC pueden 'empoderarse' (Ruiz-Ballesteros y Hernández, 2010), fortalecer su resiliencia comunitaria (Torres-Alruiz, Pilquimán y Hernández-Zúñiga, 2018; Ruiz-Ballesteros, 2011) y la sustentabilidad local (Carr, Ruhanen y Whitford, 2016). Luego, en escenarios conflictivos y de injusticia ambiental, como los acá revisados, cabe preguntarse si este tipo de turismo puede promover justicia ambiental en las comunidades que lo desarrollan, y de ser así, de qué manera podría estar sucediendo.



Marco teórico

El campo de la JA ha emergido a partir de debates y tensiones entre actores académicos, movimientos sociales y tomadores de decisiones (Sze y London, 2008; Mohai, Pellow y Roberts, 2009; Agyeman, Schlosberg, Craven y Caitlin, 2016). Su creciente cuerpo de literatura evidencia que la expansión empírica del marco conceptual avanza más rápidamente que en su representación en la literatura académica (Agyeman et al., 2016). En el ámbito académico y de políticas públicas se enfatiza aún el carácter distributivo y procedimental original del término (Arriaga y Pardo, 2011). De hecho la corriente académica que surge de la propuesta del 'ecologismo de los pobres', refleja este énfasis (Martínez Alier, 2009). No obstante, la diversidad de agendas, marcos discursivos, estrategias y acciones que despliegan las diferentes organizaciones de JA desde 1980, (ver más en Taylor, 2000; Pellow y Brulle, 2005; Acselrad, Campello, Bezerra, 2008) evidencian que tal aproximación es insuficiente, siendo necesario a nuestro juicio, tomar en cuenta otras dimensiones de la JA, como la social y correctiva, tal como plantea Kuhlen (2000). Consideramos que este marco resulta útil para profundizar el análisis de la justicia ambiental en escenarios donde participan actores indígenas, ya que, en el caso de los pueblos originarios, las movilizaciones y luchas han producido un discurso heterogéneo, amplio y pluralista de la justicia.

El problema ambiental para estos pueblos, no se limita a reclamos por acceso a los beneficios derivados de la apropiación de sus recursos, compensaciones justas, o denuncias por impactos ecológicos sobre los territorios que habitan. Se cuestionan estrategias de mercantilización de la naturaleza, reivindicaciones de tierras y de autonomía, o demandas para ejercer su derecho a definir un estilo de vida en el marco de sus propios valores culturales. Ello introduce una arista al debate de JA referida al derecho colectivo al territorio y alcances acerca del orden jurídico establecido en los diferentes estados latinoamericanos (Carruthers, 2008; Schlosberg y Carruthers, 2010; Leff, 2011). La propuesta de Kuhlen (2000) sobre la JA tiene el potencial de capturar parte de la complejidad y riqueza de estos discursos, facilitando la comprensión de las diversas injusticias ambientales que experimentan los pueblos indígenas. Requiere no obstante una adecuación al problema de estudio, tal como se presenta en este trabajo.

En cuanto a la relación del campo JA con el turismo, se reconoce que el territorio y sus lógicas de articulación se han visto impactadas como resultado de la penetración de grandes capitales y procesos de despojo, reapropiación y mercantilización de la naturaleza asociados al turismo masivo y variantes tales como el ecoturismo, creando



condiciones de injusticia entre los turistas, operadores turísticos y residentes (Corioliano y Neide, 200; Cañada, 2016; Mostafanezhad, Norum, Shelton, y Thompson, 2016; Palafox Muñoz, 2016;). En el marco de este debate, una variante poco explorada a la fecha, la presenta el TBC, en particular, el organizado por pueblos indígenas en América Latina.

En el caso del pueblo Mapuche, las numerosas iniciativas que se registran (Pilquimán y Henríquez, 2017), ocurren en territorios que presentan diversos conflictos con el estado chileno y el sector privado. Estas relaciones conflictivas presentan diversos actores, encuadres argumentales y repertorios, y provienen de diferentes fuentes (Carruthers y Rodríguez, 2009; Martínez Neira y Delamaza, 2018; Oehmichen y De la Maza, 2019). Tales conflictos hunden sus raíces en la ocupación que realizó el Estado chileno de estos territorios en la segunda mitad del siglo XIX y la política de asignación de títulos de Merced entre 1883 y 1929 (Bengoa, 1999; Pinto, 2000; Samaniego y Ruiz, 2015). En este tipo de escenarios el TBC se incorpora a proyectos de revitalización cultural y la generación de oportunidades económicas (Pilquimán, 2016). Vale decir, como una táctica política que podría, al politizar prácticas turísticas, enriquecer la construcción de una esfera deliberativa pública mapuche.

Métodos

El área seleccionada para este trabajo se ubica administrativa y geográficamente en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, sur de Chile. Esta zona se caracteriza por poseer una alta presencia mapuche (43.1%, INE 2017). Su biodiversidad es alta, asociada al bosque templado, presencia de volcanes, ríos y lagos y aguas termales. Tiene gran belleza escénica y permite el ejercicio de diversas actividades al aire libre. Así mismo es parte de la red de reservas de la biosfera. En las últimas décadas han surgido iniciativas de TBC promovidas por las comunidades locales. Como resultado de la presión por los comunes naturales que ejerce el turismo masivo y de las disputas territoriales planteadas por la propiedad de tierra, la inversión hidroeléctrica, el negocio inmobiliario existen conflictos y problemas socioambientales de distinta intensidad. Se examinan los casos localizados en Coñaripe y Lago Neltume donde se ha detectado la existencia de 21 iniciativas de turismo de base comunitaria y dos conflictos que enfrenta a comunidades y organizaciones mapuche con el Estado y el capital trasnacional (Mapa 1).

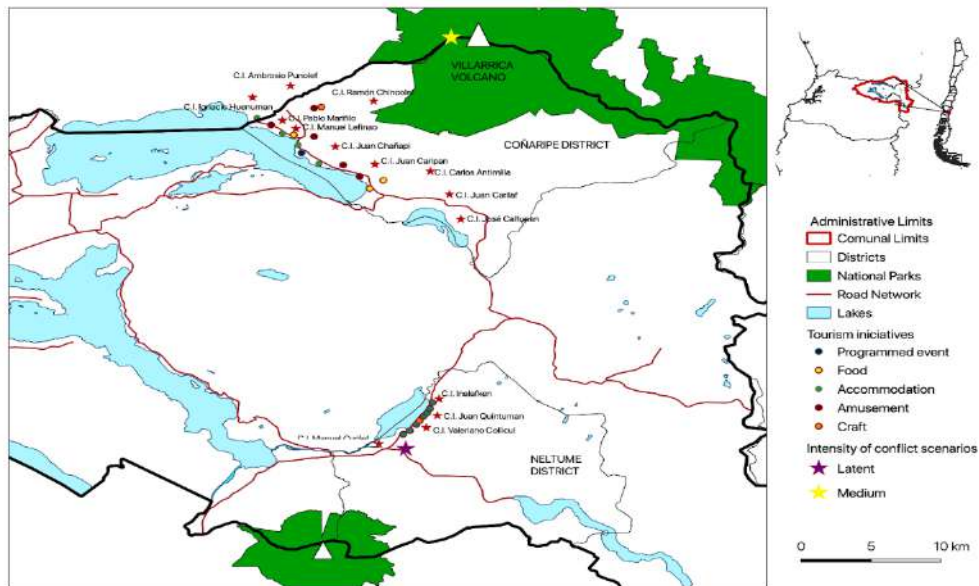


Figura 1. Iniciativas de TBC organizadas por comunidades mapuche y conflictos socioambientales en la zona precordillerana de Panguipulli (Región de Los Ríos). Elaboración Mapa Patricio Tenorio Panguí.

El primer conflicto expuesto, está relacionado con el otorgamiento de una concesión estatal para la provisión de servicios turísticos al interior de un área silvestre protegida, el Parque Nacional Villarrica. El segundo caso dice relación con la construcción de una central hidroeléctrica y sus sistemas de transmisión en Lago Neltume. En ambos escenarios conflictivos los actores mapuche movilizados han empleado o emplean el TBC como parte de los argumentos que sustentan su posición política ante tales intervenciones.

Los corpus de los dos conflictos, fueron construidos con base en la información provenientes de cinco proyectos de investigación cualitativa realizados desde el 2013 y han sido complementados con fuentes secundarias (documentos y bases de datos institucionales, prensa, material audiovisual, artículos científicos, tesis de pre y postgrado). El papel del TBC fue examinado, rastreando los argumentos que diversos actores mapuche y no mapuche (para el caso Neltume), sostuvieron respecto del objetivo y alcance político de estas experiencias turísticas desarrolladas en los territorios estudiados.

Descripción de casos

Parque Nacional Villarrica “Peweñantu”

Se presenta un escenario conflictivo de baja intensidad, que inició en el año 2013 y se encuentra actualmente activo. Se contraponen representaciones simbólicas y discursivas del territorio. El Estado de Chile, representado por organismos como



Ministerios de Bienes Nacionales, de Medio Ambiente, de Agricultura a través de la Corporación Nacional de Fomento (CONAF), impulsa a través de programas de inversión licitaciones que promueven proyectos turísticos de corte masivo. Actualmente, está en marcha la licitación del Centro de Montaña del Parque Nacional Villarrica (Sector Rucapillán), un centro de montaña y esquí basado en una concesión de 456 hectáreas, a 30 años, para la instalación de medios de elevación, alojamiento turístico, servicios de alimentación y productos turísticos en la cumbre del volcán de Villarrica. Se suman la construcción de caminos o nuevas rutas desde y hacia el Parque (Proyecto: Mejoramiento Rutas S-941, S-939 y Camino S/Rol, Sector Palguín/Coñaripe).

El avance de este desarrollo turístico es cuestionado por organizaciones y comunidades mapuche de los Lof Pukurra, Chiwaiko, Trapūr, Challupen, Ka kona rūpū, Likanray, que habitan la zona aledaña al Parque y se articulan en torno a la defensa del volcán Rucapillan. Argumentan no haber sido consultadas ni considerar los impactos que podría causar. Por ejemplo, se señalan las restricciones para el acceso y uso de los bienes comunes naturales de alto valor simbólico para los mapuche allí presentes. Ello repercute tanto en sus prácticas religiosas y espirituales, como en sus modos de producción económica tradicional y las posibilidades de uso turístico por parte de las comunidades, quienes lo desarrollan desde una perspectiva comunitaria. Se han referido también el uso de la violencia contra las comunidades dando como resultado la destrucción de refugios ancestrales usados de forma comunitaria en zonas de “piñoneo”.

Las comunidades se oponen al ‘Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Parque Nacional Villarrica’ (Subsecretaría de Turismo, Corporación Nacional Forestal y Sernatur, 2013), porque los nuevos usos turísticos que potencialmente se desarrollarán implican un cambio en la gestión tradicional de este espacio. Se registran las siguientes demandas fundamentales: 1) abortar y dejar sin efecto el proceso licitatorio autorizado por la dirección ejecutiva de CONAF a través de la resolución N°:57/2019, la licitación ID: 1091-4-LR19 “Obras Mejoramiento Zonas Uso Público PN Villarrica”, por considerarlo contrarios a la legislación vigente; 2) dejar sin efecto la propuesta pública para la concesión de uso oneroso de turismo sustentable en el área de desarrollo Rucapillan, Parque Nacional Villarrica; 3) respetar el derecho a autodeterminación para ejercer y elaborar planes de vida por parte de las comunidades movilizadas; 4) propiciar acciones tendientes al diálogo intercultural entre el Estado y las comunidades movilizadas así como su participación en la construcción de “Planes de Desarrollo”



relevantes a sus intereses; 5) aplicar los estándares internacionales para ejercer los derechos de participación y de consulta por medio de instituciones representativas del Pueblo Mapuche, tal como se estipula en el Convenio 169 de la OIT art.6, y 6) dejar sin efecto la construcción de la ruta S-941; S-939; y camino sin rol Sector Palguín-Coñaripe, por constituir un ejercicio de vulneración a los derechos consuetudinarios reconocidos internacionalmente, y generar problemas paisajístico y culturales.

Las acciones de movilización han consistido en encuentros territoriales para el diálogo (*Trawun*) y discusión sobre sus planes de vida (*küme mongen* o buen vivir), manifiestos públicos, rituales (como rogativas) y manifestaciones locales y nacionales. Las comunidades han propuesto la co-administración del parque con el fin de recuperación de territorios ancestrales y desarrollo de sus prácticas económicas tradicionales (Marín-Herrera, 2015; Marín-Herrera y Henríquez, 2015).

El proyecto hidroeléctrico de Neltume y el Turismo

Desde comienzos de la década del 2000, en la zona cordillerana se han impulsado distintos proyectos hidroeléctricos, la mayoría de los cuales han sido rechazados (Cuadra Montoya, 2014). El caso de Neltume es parte de estas iniciativas. El conflicto de intensidad alta, inició en el año 2010, y actualmente se considera cerrado (INDH, 2018). El proyecto contempló la construcción de una central con una potencia instalada de 490 MW y un tendido eléctrico entre Neltume y la subestación Pullinque de unos 20 kilómetros. Los promotores fueron Endesa, hoy Enel Chile, empresa de generación eléctrica chilena, filial de ENERSIS y subsidiaria de la empresa española Endesa y esta de la italiana Enel.

Las obras consideraban la intervención del río Fui, y la construcción de un muro en el lago Neltume para subir su cota. De esta manera, el área de impacto incluía las pequeñas localidades de Puerto Fui, Neltume y Choshuenco, así como los contornos del lago Neltume. En el valle Fui predomina la población criolla dedicada a actividades forestales, de lo que fue, en el gobierno de Allende, el Complejo Maderero Panguipulli (también, existen actividades de TBC, así como una empresa de turismo de elite administrada por la Fundación en Huilo Huilo. Por su parte, el entorno sur del lago Neltume lo ocupan comunidades mapuche que se dedican a la pequeña ganadería, la huerta, algunas labores artesanales y en los últimos decenios han comenzado a ofrecer servicios turísticos (Martínez y Delamaza, 2018). La preocupación por el impacto de este proyecto en la actividad turística fue compartida tanto por personas mapuche como por no mapuche y diversos tipos de organizaciones.



Se señaló la preocupación porque el desvío de las aguas del río Fuí hacia el lago Neltume podría dejar sin agua al río, sobretodo en período estival. Este argumento era compartido por la mayoría de los habitantes del sector, sin importar la pertenencia étnica, en especial, por quienes tenían actividades turísticas. El proyecto recibió críticas técnicas formales desde numerosos organismos públicos (Municipalidad de Panguipulli, Servicio Agrícola Ganadero Valdivia)

Los opositores al proyecto organizaron una serie de actividades para llamar la atención de autoridades y la comunidad local. Promovieron la navegación “ancestral” del lago Neltume, hicieron marchas pacíficas en Panguipulli e incluso una en el mismo valle Fui. También se articularon redes internacionales que visibilizaron el caso en España, Italia, y finalmente en el Parlamento Europeo (Entrevista a Jorge Hueque, 2017).

En diciembre del 2013, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspende la tramitación del proyecto para que termine de realizarse la consulta indígena exigible según el Convenio 169 de OIT. Los dirigentes indígenas manifestaron su desconfianza a la aplicación de la consulta “por los malos manejos y malas prácticas”. Por este motivo, presentaron recursos en la Corte de Apelaciones y luego en la Corte Suprema. Entre medio, el 7 de Marzo del 2014, los opositores al proyecto recibieron un espaldarazo del Ministerio de Economía, quien nombró el área como Zona de Interés Turístico (ZOIT). Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Suprema, en Septiembre del 2014, rechazó el recurso de protección presentado por los opositores al proyecto. La respuesta no se dejó esperar, y éstos llamaron a boicotear la consulta.

Pese al revés judicial sobre la consulta indígena, dos meses después el XXIV Juzgado Civil de Santiago, revocó los derechos de Agua de Endesa/Enel. En los argumentos se señala que en la concesión de “los derechos para usar las aguas del lago Pihueico (afluente del río Fuí), otorgados por la Dirección General de Aguas, hubo vicios en el procedimiento”. Este fue el argumento jurídico que definitivamente sepultó el proyecto. Finalmente, en Diciembre de 2015, el representante legal de Empresa Nacional de Electricidad S.A. ENDESA, a través de una carta dirigida al SEA, “solicita retirar del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica Neltume”. En tanto, en comunicación del 27 de marzo de 2017, se solicita lo mismo con respecto a la “Línea de Alta Tensión S/E Neltume - Pullinque”.



Discusión y conclusiones

Los escenarios descritos difieren en el grado de intensidad de los conflictos, actores, framing y repertorios. No obstante en ambos casos, se observan injusticias ambientales generadas por los proyectos en juego. Por ejemplo, en el P.N. Villarrica, actores gubernamentales, argumentan que las mejoras al proyecto generarán beneficios económicos. Sin embargo para las comunidades mapuche que habitan las zonas aledañas dicho proyecto implicará más restricciones al uso tradicional y cultural de este espacio. Por otra parte, el irrespeto al derecho de participación en la construcción de planes de desarrollo relevantes al parque nacional violenta dimensiones procedimentales de la JA. Así mismo, acciones como la inscripción fiscal de las tierras del parque a nombre del estado chileno ocurrida en el año 2010, que ignoraron la propiedad ancestral de las tierras y con ello los lineamientos legales nacionales e internacionales (Arce, Guerra y Aylwin 2016; De La Cuadra, 2013), menoscaban la dimensión social del JA, en la medida que no se les reconocen tales derechos políticos. En el caso Neltume, las comunidades locales, en una particular configuración de actores (coaliciones interétnicas) no percibieron beneficios por la instalación de la central hidroeléctrica en Neltume. En cuanto a los esquemas de compensación en Neltume pudieron observarse magras propuestas por parte de Endesa hacia la comunidad. Ello impacta dimensiones distributivas y correctivas de la JA.

Por otra parte, en ambos contextos los conflictos ambientales con terceros incluyeron a comunidades mapuche que, o estaban ejecutando programas de desarrollo local en base al TBC (P.N. Villarrica) o los incorporaron una vez detonado el conflicto (caso Neltume). ¿Qué rol pudo jugar el TBC aquí?. Puede plantearse que el desarrollo de estas experiencias turísticas ha constituido una fuente de experiencia organizativa que facilitó la movilización y el agenciamiento contra proyectos que impactaban sus territorios. Sus alianzas con ambientalistas locales, universitarios y otras organizaciones mapuche del sector, facilitó los recursos técnicos y asociativos que les permitió definir mejor una agenda y estrategias de acción que escalaron el nivel local. Cabe destacar que ambos conflictos ponen en discusión encuadres argumentales en torno a los significados culturales del territorio, los derechos indígenas y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, sería erróneo pensar que en este tipo de conflictos sólo se consideran argumentos valorativos o ideacionales. Lo que hace el TBC es hacer viable este tipo de plataforma argumental, anclándolo en un modelo de desarrollo económico alternativo en torno al cuidado, control y uso responsable del territorio. Como evidencia la literatura para comunidades pobres (Martínez-Alier, 2009; Folchi, 2001), se demanda



acceso y participación para hacer sustentable una economía de pequeña escala en torno a los bienes comunes naturales. Quizás, este encuadre del conflicto, que obliga a asociarse con otros e interactuar con empresas y autoridades, es lo que explique un repertorio de acción que combina acción institucional y no institucional. El punto es que así como estas alianzas permiten actuar en demanda de distintas dimensiones de la justicia ambiental, el conflicto ambiental puede ser visto como un catalizador de nuevos niveles de agencia indígena. Como diría Touraine (1995: 251-281), es el conflicto el que constituye al actor y no a la inversa.

Sin embargo el TBC pareciera que puede promover JA. Por ejemplo, tiene el potencial disminuir la inequidad distributiva, ya que aumenta beneficios económicos, sociales y culturales a las comunidades locales. Así a nivel cultural, abre vías para el fortalecimiento organizacional, debilitado por el divisionismo inducido por el Estado de Chile. Al respecto miembros de iniciativas turísticas plantean: *“Es posible que volvamos a trabajar en comunidad, quizá no tan juntos como antes, pero sí de manera más cercana, haciendo enlaces con la demás gente mapuche y que cada uno pueda trabajar en su casa o en su Lof para dar a conocer la cultura”* (SM, 2013). Esto adquiere especial relevancia considerando que entre los principales obstáculos que han enfrentado los gestores mapuche de las experiencias turísticas han sido los de tipo socio-cultural (por ejemplo, identidad estigmatizada producto de la discriminación histórica, Pilquimán 2018). Adicionalmente, aún cuando el nivel de consolidación de estas iniciativas aún es bajo, las mismas tienen el potencial de desarrollar acuerdos socioproductivos con los que amplían oportunidades de trabajo, renta e inserción en la economía de mercado, manteniendo sus modos de vida y de producción (Pacheco Habert, Henríquez Zúñiga, Sampaio y Oyarzún Méndez, 2011).

Así mismo, la politización promovida por el TBC puede aumentar la participación pública en diversos asuntos de interés al desarrollo turístico. Con ello se fortalece la dimensión procedimental de la JA. Se cuentan experiencias donde miembros de diferentes iniciativas de TBC han sido parte de mesas de trabajo con el sector privado, público y académico orientadas a identificar sinergias y conflictos entre desarrollo turístico y otros sectores económicos (Pacheco Habert y Szmulewicz Espinoza, 2013; Pacheco Habert y Henríquez-Zúñiga, 2016). Ello genera alianzas para la obtención de recursos económicos, pero también les ha conferido cierta relevancia como actores políticos. Esto se observó en las movilizaciones sociales para defender el derecho a veto y consentimiento informado ante megaproyectos, como los planteados en Neltume. Al



respecto miembros de iniciativas TBC señalaron: *“La iniciativa de este Proyecto [turístico] comenzó con el hecho de mostrar el territorio y dar a conocer más o menos lo que se hacía acá...como atracción para que puedan venir a conocer. También fue un tema el...de las centrales hidroeléctricas... que venían a invadir en lugar, el territorio...por una empresa llamada Endesa...y ahí está la comunidad dando la pelea para que este proyecto no se haga porque consideramos que es un deterioro a los proyectos turísticos que nosotros tenemos en mente a futuro y lo que se está trabajando hasta el momento”*. (NC, 2014).

El TBC promueve la participación directa en la actividad turística, en tanto que son las mismas comunidades indígenas las que diseñan, controlan y gestionan los servicios turísticos que ofrecen de acuerdo a sus propios planes de vida y visión de desarrollo comunitario (*Kume mongen* o Buen vivir). De esta manera afirman por ejemplo *“la comunidad se pone de acuerdo y hace un proyecto de turismo”* o *“la comunidad se organiza en función de la oferta turística”*. El TBC no sólo supone una innovación social que requiere aprendizajes específicos de esta actividad socio-productiva, desencadena además procesos educativos orientados al rescate de la memoria y valorización de su patrimonio territorial. Este uso turístico del patrimonio se desarrolla desde una concepción más amplia de reivindicación cultural, por ejemplo: a través de la recuperación y registro de leyendas, cuentos, mitos e historia local; técnicas artesanales como el tejido en *witral* (telar mapuche) y saberes sobre la naturaleza que son integrados en el desarrollo de sus experiencias de turismo basadas en la cotidianidad de sus actores. Esto incluye, formas de trabajo, estrategias de supervivencia, conocimiento del medio natural (y de la tierra), su cultura y tradiciones, además de capacidades de organización y asociatividad.

Bien sea empleado como parte de los encuadres argumentales que demandan justicia participativa, o bien como plataforma de acción donde se experimenta la participación directa en la gestión, protección y uso sustentable de los servicios turísticos ofrecidos, el TBC promueve formas de organización social y política requeridas para fortalecer la dimensión procedimental de la justicia ambiental. Finalmente, este fortalecimiento del rol de actores territoriales partícipes de la construcción de esferas públicas deliberativas, implica en la práctica, un reconocimiento de su calidad de sujetos políticos, que los puede colocar en condiciones potencialmente mejores para negociar, no sólo algunas de sus demandas específicas, sino también, en caso de ser necesario, esquemas de



compensación justa ante determinadas intervenciones, o reparaciones por daños infligidos. Con ello, se promueven dimensiones sociales y correctivas de la JA.

Referencias bibliográficas

Acsegrad, H., Campello do Amelo, C. y Neves Bezerra, G.D. (2008). *O que é justiça ambiental*. Brasil: Garamond Universitaria.

Agyeman, J., Schlosberg, D., Craven, L. y Caitlin, M. (2016). Trends and Directions in Environmental Justice: From Inequity to Everyday Life, Community, and Just Sustainabilities. *Annu. Rev. Environ. Resour.* 41,1–6.

Arce, L., Guerra, F. y Aylwin, J. (2016). *Cuestionando los enfoques clásicos de conservación en Chile. El aporte de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la protección de la biodiversidad*. Temuco, Chile: Observatorio Ciudadano Consorcio TICCA. IWGIA.

Arriaga Legarda, A. y Pardo Buendía, M. (2011). Justicia ambiental. El estado de la cuestión. *Revista Internacional de Sociología (RIS)*. 69(3), 627-648, doi:10.3989/ris.2009.12.210

Bengoa, J. (1999). *Historia de un conflicto. El Estado y los mapuches en el siglo XX*. Santiago de Chile: Planeta.

Bize Vivanco, C. (2017). *El otoño de los raulíes*. Santiago: Tiempo robado editoras.

Cañada, E. (2016). Implicaciones socioambientales de la construcción del espacio turístico. *Ecología Política* 52: 12-16.

Carr, A., Ruhanen, L. y Whitford, M. (2016). Indigenous peoples and tourism: the challenges and opportunities for sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*. 24, 1067-1079. doi: 10.1080/09669582.2016.1206112.

Carruthers, D.V. (2008). *Environmental Justice in Latin America Problems, Promise, and Practice*. USA: The MIT Press.

Carruthers, D. y Rodríguez, P. (2009). Mapuche protest, environmental conflict and social movement linkage in Chile. *Third World Quarterly* 30: 743–60

Coriolano, L. y Neide, L. (2006). Turismo: práctica social de apropiación e de dominación de territorios. En M.I., Gerais de Lemos, M., Arroyo, A., M.L., Silveira (Eds). *América Latina: ciudad, campo e turismo*. (pp. 367-378) San Pablo, Argentina: CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Cuadra Montoya, X. (2014). Nuevas estrategias de los movimientos indígenas contra el extractivismo en Chile. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals* 105, 141-163.

De La Cuadra, F. (2013). Cambio climático y conflicto socioambiental. Apuntes sobre el antagonismo entre el pueblo mapuche, el Estado chileno y las empresas. En *Cambio*



climático, movimientos sociales y políticas públicas Una vinculación necesaria. (pp. 218-238), Postigo, J.C. (Ed), Santiago de Chile: CLACSO Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. ICAL.

Delamaza, G., Maillet, A. y Martínez, C. (2017). Socio-territorial conflicts in Chile: configuration and politization (2005-2014). *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 104, 23-46. doi: 10.1080/09502380601162498

Folchi, M. (2001). Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas. *Ecología Política* 22, 79-100.

Grimm, I. y Sampaio, C. (2011). Turismo de base comunitária: convivencialidade e conservação ambiental. *Revista Brasileira de Ciências Ambientais* 19, 57-68.

Hernández-Ramírez, M. y Ruiz-Ballesteros, E. (2011). Etnogénesis como práctica. Arqueología y turismo en el pueblo Manta (Ecuador) AIBR. *Revista de Antropología Iberoamericana* 6(2), 159-191.

Hervé Espejo, D. (2010). Noción y elementos de la justicia ambiental: directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica. *Revista de Derecho XXIII* (1), 9-369.

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) (2012). Mapa de conflictos socioambientales en Chile 2012. <https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/478>

Instituto Nacional de Estadística. (2017). Segunda entrega de resultados definitivos Censo 2017.

Kuhen, R.R. (2000). A Taxonomy of Environmental Justice. *Environmental Law Reporter News & Analysis* 30, 10681.

Lee, S. y Jamal, T. (2008). Environmental Justice and Environmental Equity in Tourism: Missing Links to Sustainability. *Journal of Ecotourism* 7(1), 44-67. doi:10.2167/joe191.0.

Leff, E. (2011). *Justicia ambiental: Construcción y defensa de los nuevos derechos ambientales, culturales, y colectivos en América Latina.* México, PNUMA.

Marín-Herrera, M. (2015). R-existencia de comunidades mapuche en el Parque Nacional Villarica. Aportes del desarrollo a escala humana para la justicia ambiental. Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

Marín-Herrera, M. y Henríquez, C. (2015). Turismo de base comunitaria frente a conflictos etno-políticos y socioambientales en comunidades Mapuche del sur de Chile. En Pinol, A. (Ed.) *Democracia versus neoliberalismo. 25 años de neoliberalismo en Chile.* (pp. 304-323). Santiago, CLACSO.



Martínez Neira, C. (2009). Comunidades y redes de participación mapuche en el siglo XX. Nuevos actores étnicos, doble contingencia y esfera pública. En Martínez Neira, C. y Estrada Saavedra, M. (Eds). *Las disputas por la etnicidad en América Latina: movilizaciones indígenas en Chiapas y Araucanía*. (pp. 135- 154). Santiago, editorial Catalonia.

Martínez Neira, C. y Delamaza, G. (2018). Coaliciones interétnicas, framing y estrategias de movilización contra centrales hidroeléctricas en Chile: ¿Qué podemos aprender de los casos de Ralco y Neltume? *Middle Atlantic Review of Latin American Studies* 2 (1), 68-96.

Martínez-Alier, J. (1992). *De la economía ecológica al ecologismo popular*, Icaria, Barcelona (3ª edición, Icaria, Barcelona-Montevideo).

Mohai, P., Pellow, D. y Roberts, J.T. (2009). Environmental justice. *Annu. Rev. Environ. Resour.* 34, 405–430. doi.10.1146/annurev-environ-082508-094348

Moreno-Jiménez, A., Cañada-Torrecilla, R., Vidal-Domínguez, M.J., Palacios-García, A. y Martínez-Suárez, P. (2018). Assessing environmental justice through potential exposure to air pollution: A socio-spatial analysis in Madrid and Barcelona, Spain. *Geoforum* 69, 117–131. <http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.12.008>.

Mostafanezhad, M., Norum, R., Shelton, E. y Thompson, A. (2016). *Political ecology of tourism. community, power and the environment*. Londres (Reino Unido): Routledge. Taylor & Francis Group

Nahuelpan, H. (2012). Formación colonial del Estado y desposesión en Ngulumapu. En Comunidad de Historia Mapuche (Eds.), Comunidad de Historia Mapuche. *Ta iñ fijke xipa rakizuameluwün. Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche*. (pp. 123-153). Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, Temuco: Chile.

Oehmichen, C. y De la Maza Cabrera, F. (2019). Turismo, pueblos indígenas y patrimonio cultural en México y Chile. Pasos. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural* 17, 53-64. doi: 10.25145/j.pasos.2019.17.004

Pacheco Habert, G. y Henríquez-Zúñiga, C. (2016). El Turismo de Base Comunitaria y los procesos de gobernanza en la comuna de Panguipulli, sur de Chile. *Gestión Turística* 25, 42-62.

Pacheco Habert, G. y Szmulewicz Espinoza, P. (2013). Sinergias y conflictos entre desarrollo turístico y otros sectores economicos. El caso del turismo de intereses especiales en la región de los ríos. *Gestión Turística* 20, 39-59.

Pacheco Habert, G., Henríquez Zúñiga, C., Sampaio, C.A. y Oyarzún Méndez, E. (2011). Encadenamientos socioproductivos y ecosocioeconomia de las organizaciones. Análisis



propositivo para el Turismo de Intereses Especiales (TIE) en el territorio lacustre de la región de la Araucanía. *Gestión Turística* 16, 49-68.

Palafox Muñoz, A. (2016). Turismo e imperialismo ecológico: El capital y su dinámica de expansión. *Ecología Política* 52, 18-25.

Pasa Gómez, C.R., Cavalcanti Falcão, M. y Gómez Castillo, L.A. (2015). Turismo de Base Comunitária como Inovação Social: congruência entre os constructos. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural* 13 (5), 1213-1227.

Pellow, D.N. y Brulle, R.J. (2005). *Power, Justice, and the Environment: A Critical Appraisal of the Environmental Justice Movement*. Cambridge, MA: The MIT Press

Pereiro, X. (2016). A review of Indigenous tourism in Latin America: reflections on an anthropological study of Guna tourism (Panama), *Journal of Sustainable Tourism*, doi: 10.1080/09669582.2016.1189924

Pilquimán, M. y Henríquez Zúñiga, C. (2017). Aproximaciones al turismo comunitario en Chile. En Toledo Solha, K., Elesbao, I. y De Sousa, M. (Organizadores) *O turismo rural comunitário como estratégia de desenvolvimento*. (pp. 135-151). UFRGS Editora, Brasil.

Pilquimán, M. (2016). El turismo comunitario como una estrategia de supervivencia. Resistencia y reivindicación cultural indígena de comunidades mapuche en la Región de los Ríos (Chile). *Estudios y perspectivas en turismo* 25 (4), 439-459.

Pilquimán, M. (2018). Turismo, actores e imaginarios. Experiencias de turismo comunitario de comunidades mapuche (Región de Los Ríos-Chile). En Muñoz Barriga, A., Osorio, M. y Guijarro, G. (Eds.) *Tendencias de la Investigación en Turismo de América Latina*. (pp. 64–76). Quito: Pontificia Universidad Católica de Quito.

Pinto, J. (2000). De la inclusión a la exclusión. *La formación del estado, la nación y el pueblo mapuche*. Santiago de Chile, IDEA (Instituto de Estudios Avanzados), Santiago, Universidad de Santiago.

Roux, F. (2013). *Turismo comunitario ecuatoriano, conservación ambiental y defensa de los territorios*. Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE). Ecuador. Quito.

Ruiz-Ballesteros, E. y Hernández-Ramírez, M. (2010). Tourism that empowers? Commodification and appropriation in Ecuador's turismo comunitario. *Critique of Anthropology* 30 (2), 201–229. doi: 10.1177/0308275X09345426.

Ruiz-Ballesteros, E. (2011). Social-ecological resilience and community-based tourism. An approach from Agua Blanca, Ecuador. *Tourism Management* 32, 655–66.



- Ruiz-Ballesteros, E. (2017). Presentación. Claves del turismo local. *Gazeta de Antropología* 33 (1) <http://hdl.handle.net/10481/44359>
- Samaniego, A. y Ruiz, C. (2015). Pueblo mapuche y neoliberalismo. En Pinol Bazzi, A. (Ed.) *Democracia versus Neoliberalismo. 25 años de neoliberalismo en Chile* (pp. 179-209). Santiago de Chile: Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL).
- Schlosberg, D. y Carruthers, D. (2010). Indigenous Struggles, Environmental Justice, and Community Capabilities. *Global Environmental Politics* 10(4), 12-35. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00029
- Sze J. y London J.K. (2008). Environmental Justice at the Crossroads. *Sociology Compass* 2/4: 1331–1354, 10.1111/j.1751-9020.2008.00131.x
- Taylor, D.E. (2000). The Rise of the Environmental Justice Paradigm: Injustice Framing and the Social Construction of Environmental Discourses. *American Behavioral Scientist* 43: 508–80.
- Torres-Alruiz, M.D., Pilquimán V., M.J. y Henríquez-Zúñiga, C. (2018). Resilience and Community Based Tourism: Mapuche Experiences in Pre-Cordilleran Areas (Puyehue and Panguipulli) of Southern Chile. *Jour. Soc. Sci.* 7, 249; doi:10.3390/socsci7120249.
- Touraine, A. (1995). *Producción de la sociedad*. México, UNAM/IFAL.
- Whyte, K.P. (2010). An environmental justice framework for indigenous tourism. *Environmental Philosophy* 7(2), 75-92.
- Whyte, K.P. (2011). The Recognition Dimensions of Environmental Justice in Indian Country. *Environmental Justice* 4(4), 199-205. doi: 10.1089/env.2011.0036



La memoria cultural y comunicativa del movimiento estudiantil de tres universidades del sur de Colombia¹.

David Felipe Bernal Romero²

Resumen

A continuación se realizará una presentación de los avances de la investigación titulada Memoria cultural y comunicativa del Movimiento Estudiantil de tres Universidades del Sur de Colombia entre los años 2010 y 2018. Las universidades Surcolombiana, del Cauca y de la Amazonía: Un antes, durante y después de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior UNEES.

Se parte de la idea de que la historia del Movimiento Estudiantil en la región suroccidente de Colombia muestra que carece de una construcción sobre sus prácticas comunicativas y su memoria cultural, lo que limita las posibilidades de apropiación y transformación de las mismas. Por ello se pretende comprender e interpretar las prácticas comunicativas del Movimiento Estudiantil de tres Universidades del Sur de Colombia que han configurado su memoria cultural y comunicativa entre los años 2010 y 2018.

Para el desarrollo de este estudio, se plantean las siguientes categorías: Movimiento social y estudiantil desde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales y la propuesta de Raúl Zibechi (2015); memoria comunicativa y cultural a partir de los estudios culturales; la memoria larga, concepto elaborado por Silvia Rivera; prácticas comunicativas desde el campo de la educación-comunicación y región-territorio.

El estudio de tipo cualitativo, tiene en cuenta fuentes documentales y orales. Con respecto a las primeras, se cuenta con periódicos, documentos oficiales, archivos, artículos, boletines, piezas comunicativas. Con respecto a las segundas, se pretende re-construir la historia de vida de algunos actores del Movimiento Estudiantil.

Palabras clave

Memoria cultural; Memoria comunicativa; Movimiento estudiantil; Región suroccidente; Comunicación popular.

Introducción

El estudio de los Movimientos Estudiantiles en América Latina se ha abordado principalmente desde la Historia y las fases visibles de la movilización. Hay una tendencia a ver a los Movimientos Estudiantiles como un agente autónomo y no desde



sus protagonistas, es decir, pocas veces se tiene en cuenta a los y las jóvenes que hacen parte de éste, lo que también indica que se ha estudiado el Movimiento a nivel nacional, dejando a un lado las particularidades de las regiones. Por ello esta investigación considera el territorio como una categoría principal.

En este sentido, este estudio se enmarca en el campo del lenguaje, la comunicación y la educación, para comprender la construcción de la memoria cultural, comunicativa y de larga duración del Movimiento Estudiantil de tres universidades del suroccidente de Colombia a partir de sus procesos comunicacionales.

Acudir a estas categorías permitirá, a partir de los relatos de sus protagonistas, establecer sus identidades, los procesos de formación autónoma, caracterizar sus procesos comunicacionales desde las interacciones y sus producciones mediáticas, comprender cómo se ha desarrollado este fenómeno en la región y los aportes que se pueden realizar al campo comunicación-educación.

Finalmente, el estudio permitirá acercarse a otras formas de participación, educación y comunicación que han construido los jóvenes de la región suroccidente, particularmente de las Universidades Surcolombiana, del Cauca y de la Amazonia, lo que podrá conllevar al fortalecimiento de la democracia participativa en sus territorios; que las IES- Públicas tengan en cuenta otras formas de plantear los procesos de formación y se fortalezcan las prácticas formativas en Investigación de estas Universidades.

Fundamentación del problema

El último paro nacional estudiantil fue decretado el 11 de octubre de 2018 por los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior del país, que se congregaron entre marzo y septiembre en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior ENEES, posteriormente denominado Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior -UNEES- del que emergió el Pliego Nacional de Exigencias que contiene 10 demandas relacionadas con financiación, acceso a la educación, democracia y autonomía.

Como antecedentes de esta movilización se pueden mencionar los procesos adelantados en 2011 y 2016. En el año 2011, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, detuvo la reforma a la Ley 30 del Gobierno Nacional y construyó una propuesta que se considera un hito en la historia del Movimiento Estudiantil del país, por la capacidad que tuvo de plantear alternativas al modelo educativo. Entre tanto, en el año 2016, tras el Decreto 2450 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional que



reglamenta “las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación”; se movilizaron estudiantes de todo el país a nivel local y nacional por considerar que el Decreto iba en contravía de la autonomía universitaria y agudizaba la desfinanciación de la Educación Superior Pública.

En los procesos mencionados, los estudiantes de las Universidades Públicas, realizaron acciones creativas y de formación autónomas desde el arte, la cultura, los actos performativos la comunicación, con el fin de abordar las problemáticas de la educación superior. Estos procesos que plantean unas continuidades y discontinuidades en la lucha estudiantil durante este período, han sido fundamentales para ganar autonomía, cualificación y para la construcción de propuestas fundamentadas. Todo ello, a pesar de que la universidad colombiana en las últimas décadas ha perdido su carácter formador y de problematización de las realidades específicas de los territorios, también las dificultades epistemológicas que se presentan en el proceso de aprendizaje del lenguaje, la comunicación y la argumentación y la ruptura en la construcción de memoria en los períodos donde no son visibles las acciones colectivas, por lo que se considera que los procesos comunicacionales han permitido, entre otras cosas, fortalecer los aprendizajes del pasado.

De acuerdo con lo anterior, se comprende el lenguaje en un sentido amplio, que se relaciona con la conciencia y con el sujeto social. Con esto, se concibe que en el mundo de la vida se va adquiriendo la conciencia, una conciencia que parte de la experiencia del individuo. De acuerdo a Husserl, citado por el profesor Guevara (s.f.), “No puede [...] existir el mundo si no hay conciencia de él; y esa conciencia se estructura como lenguaje y su estructuración es un proceso simultáneo e interdependiente”. (pp. 7 y 8).

Al realizar una aproximación a lo construido por el Movimiento Estudiantil, se destaca que sus procesos de formación no sólo han estado mediados por la educación formal, se presume que su elaboración argumentativa parte de los conocimientos que han construido en el mundo de la vida, los cuales se han transformado en el marco del ejercicio de la movilización, donde la construcción de relaciones horizontales, los ha formado como líderes y en la comprensión de la relación entre el político y el pedagogo, de acuerdo con Freire (2007).

Para comprender el lenguaje y los procesos comunicacionales del Movimiento estudiantil en la última década, es importante tener en cuenta sus repertorios de acción o de protesta. Con la -MANE- en 2011, se observa una ruptura en la movilización



estudiantil que existía hasta entonces. Su lenguaje se propició a partir de besatones, abrazatones, entre otros. Estos repertorios continúan en las movilizaciones actuales y en la comunicación que tiene el movimiento estudiantil, donde la pedagogía, la lúdica, lo artístico y lo creativo, prevalecen en la argumentación.

De esta forma, se comprende la comunicación en relación directa con la(s) cultura(s) ya que de acuerdo con Dubravcic (2002), “los procesos de emisión y recepción aparecen entonces mediados por aspectos provenientes de fuentes internas y externas al sujeto: instituciones, organizaciones, relaciones, ideas, repertorios, referentes culturales, etc. que se convierten en fuentes de significación”. (p. 44). Por lo tanto, la escuela juega un papel preponderante en la necesidad de construir otros relatos, tener en cuenta otras visiones y como lo dice Barbero (1999), la necesidad de “proporcionarnos elementos con los cuales construir identidades nuevas no narcisistas ni provincianas, identidades que puedan dialogar entre sí, y con el resto de identidades del mundo”. (p. 194).

Por su parte, en palabras de Huergo (2000), el campo comunicación-educación implica:

[tener en cuenta la] transversalidad que imprime el carácter al proyecto global de Comunicación/Educación a partir del interjuego entre dos trayectos que se entrecruzan. Primero: la persistencia y profundización de estudios culturales de la comunicación en la educación, capaces de describir la transformación en las formas, las prácticas y las instituciones culturales, capturando el sentido político de la cultura y el sentido cultural de la política, y fecundos en la comprensión del proceso de formación (en el sentido amplio de educación) posmoderna de identidades y sujetos. Segundo: la construcción creativa de una pedagogía crítica de las mediaciones culturales que permitiera que la pedagogía fuera hablada desde la reconexión entre cultura y política, y que conjugara la acción formativa de identidades en la trama de sus reconocimientos y la acción transformadora de las condiciones materiales desiguales e injustas en la producción de esas identidades. (Huergo, 2000, p. 14).

De acuerdo con lo anterior, cobra relevancia el estudio de los movimientos sociales y en este caso el movimiento estudiantil, desde el campo de la comunicación-educación, teniendo en cuenta los retos que implica comprender sus procesos de formación, de gestión y autogestión y la forma en que construyen su territorio, porque como se verá más adelante, el interés se centra en las procesos comunicacionales que construyen su memoria cultural, como también sus identidades y subjetividades lo que les permite generar propuestas para la disputa política en distintos ámbitos.



Así mismo, se presume que el movimiento estudiantil podría comprenderse desde la tercera generación del campo comunicación-educación (Amador y Muñoz, 2018), partiendo de la idea de que los discursos y las prácticas de éste, apuntan a discutir el modelo de desarrollo a partir de la disputa por el conocimiento, sus formas organizativas y las luchas que emprenden, ya que “lo que está en juego es la defensa de la vida (humana y no humana), la construcción del nosotros y el modelo de desarrollo, a través del espacio común y comunal de comunicación-educación. (Amador y Muñoz, 2018, p. 51).

En este sentido, cuando los estudiantes plantean propuestas alternativas a las hegemónicas en la educación, están propiciando una confrontación de saberes y una negociación cultural (Mejía, 2018), donde se pone en juego principalmente el ámbito de vinculación a lo público ya que,

se constituye para que los sujetos de las prácticas orientadas en la perspectiva de educación popular decidan convertirse en actores que llevan sus intereses colectivos para ser disputados en lo público, reconociéndolo como un escenario en construcción. Requiere un ejercicio de discernimiento y edificación de la autonomía por parte de quienes lo realizan, y, en ese sentido, la educación popular ayuda a construirlo como apuesta de los sujetos que se están convirtiendo en actores. (Mejía, 2018, p. 16).

Finalmente, las redes sociales son otro escenario para la construcción de los discursos y la memoria del Movimiento Estudiantil. El uso de Facebook, Twitter, Whatsapp, entre otros, han permitido comunicar no sólo las convocatorias, también los avances y las dificultades en el proceso, ante la desinformación de medios de comunicación que pueden distorsionar los propósitos de Movimiento Estudiantil.

Ahora bien, los departamentos que conforman la región suroccidente de Colombia, se caracterizan por compartir prácticas, procesos y problemas en el marco de una diversidad geosociohistórica en la que interactúan elementos sociales, políticos, culturales y ambientales. Esta diversidad se ha constituido en el centro de intereses nacionales y transnacionales de diversos actores en la búsqueda de un control territorial, en gran medida por la diversidad de bienes naturales comunes que posee al estar ubicada en el Macizo Colombiano y que son vistos como potencial estratégico para la acumulación de capital desde el extractivismo y la desposesión e incluso para el narcotráfico. Es así que por un lado Gobierno, sectores económicos, empresas multinacionales y transnacionales, grupos insurgentes, paramilitares, narcotraficantes y mafias se la disputan; pero por el otro, existe una diversidad de actores populares y



comunitarios que plantean formas otras de control y ordenamiento del territorio, otras territorialidades y territorializaciones en las que se incluya la diversidad e interacción que se da no solo en términos sociales y culturales sino también políticos y ambientales.

Así pues, ésta ha sido una Región atravesada por los impactos de: el conflicto político militar y armado; el modelo extractivista del capitalismo corporativo; de la reprimarización de la economía; la política neocolonial de despojo y desposesión de los territorios y saberes. Existe ingobernabilidad, falta de representatividad y compromiso de los políticos electos con sus comunidades. (Observatorio Nacional de Paz, 2012), el asesinato sistemático a líderes sociales y persecución tras la implementación del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; y una creciente conflictividad socioambiental que trae, entre otras, la vulneración a los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, entre otros.

Ante el panorama se han hecho crecientes y visibles las luchas de comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades Afro, de organizaciones sociales y de procesos estudiantiles; en torno a:

la defensa de los territorios, el agua y la vida; en la búsqueda de un poder popular por el control territorial; la defensa de la educación y comunicación pública, popular y propia desde el marco de iniciativas pluridiversas; luchas interculturales por el reconocimiento político y autónomo de pueblos campesinos, indígenas y afros; luchas por el acceso a la vivienda digna; luchas contra el colonialismo que controla nuestros territorios y cuerpos, pero además nuestra historia, identidad, cultura y pensamiento propio. Luchas de las mujeres por sus derechos civiles, políticos y desde las identidades de género. Luchas del movimiento sindical; lucha por acueductos comunitarios; por la defensa de los Niñ@s; por la defensa de los derechos humanos; por la soberanía alimentaria, defensa de semillas, por tener una buena alimentación; por el acceso y tenencia de la tierra, por la titulación de territorios y contra los monocultivos³.

Como se ha mencionado anteriormente, una de las pugnas se presenta en el tema de educación, la ciencia y el conocimiento. En cuanto a la planeación en este asunto, se percibe que luego del intento fallido por modificar la Ley 30 de 1992 en el primer gobierno de Juan Manuel Santos y que dio origen a la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes - MANE- en el año 2011, el Gobierno Nacional presentó la política pública de educación superior denominada “Acuerdo por lo Superior 2034” en el que participaron más de 33 mil personas de acuerdo con el documento presentado en el año 2014. Así mismo, entre



los grandes temas que se discutieron, se encuentran los siguientes: 1) Educación inclusiva; 2) Calidad y pertinencia; 3) Investigación (ciencia, tecnología e innovación); 4) Regionalización; 5) Articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano; 6) Comunidad universitaria y bienestar; 7) Nuevas modalidades educativas; 8) Internacionalización; 9) Estructura y gobernanza del sistema; 10) Sostenibilidad financiera del Sistema. (Consejo Nacional de Educación Superior, 2014).

Así, las universidades son fundamentales para la planeación estratégica y la regionalización del país a partir de la vocación económica, es decir, el capitalismo corporativo. En consecuencia, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno presidido por Iván Duque Márquez (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, establece el “Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del Futuro”.

Se evidencia cómo las transformaciones del sistema económico hegemónico, donde las corporaciones transnacionales juegan un papel protagónico, han generado una progresiva mercantilización de la educación, lo que implica un cambio en el sentido común que se construye sobre las nociones “competencia” y “competitividad”, desdibujando el acto pedagógico que lleva sin duda a la precarización en la docencia, homogenización curricular que desconoce otro tipo de saberes de lo cual deviene la educación como servicio, en este sentido, se plantea la calidad como un asunto de cobertura, se fortalece la formación para el trabajo, las universidades se deben convertir en autosostenibles y se invita al sector privado a inyectar capital a las Instituciones Educativas Públicas, conduciendo a la pérdida gradual de la autonomía.

Llama la atención que los currículos estandarizados que se construyen en las Instituciones de Educación Superior desconocen las lógicas territoriales, pues la docencia, la investigación y la proyección social responden a los intereses del mercado. Por ello se presume que el movimiento estudiantil se traza como horizonte político una educación contextualizada que responde a las necesidades de la gente para mejorar su calidad de vida y también porque se considera que ha comprendido que las comunidades han construido conocimientos que responden a sus realidades y que han sido invisibilizados por la ciencia moderna y las políticas de la Globalización.

Por lo tanto, la disputa en los territorios también se da en el ámbito del conocimiento por dos motivos principalmente: el primero, porque se privilegia lo técnico y tecnológico para la dominación de los “recursos naturales” y el segundo, porque se produce un



conocimiento hegemónico que desconoce los saberes propios o la ciencia propia como lo denominaría Fals Borda, por ello se presume que en este asunto, el Movimiento Estudiantil juega un papel fundamental porque posiblemente sus luchas se dan por la defensa de los saberes otros.

Por otra parte, se presume que el Movimiento Estudiantil podría estudiarse desde lo que se ha denominado movimientos populares, ya que esta categoría tiene en cuenta las relaciones con el territorio. Es así que de acuerdo con Amador (2014), a partir de las dinámicas políticas y económicas de los últimos 20 años en América Latina y el Caribe, se pueden establecer cuatro tipos de Movimientos Sociales a partir de las investigaciones consultadas. Vale la pena resaltar los que defienden el territorio y están a favor de la reforma agraria.

Se considera que hay una relación entre los procesos comunicacionales y el movimiento popular, ya que actualmente se piensa que están determinadas por el territorio y las territorializaciones porque en ese escenario se construyen las culturas y por lo tanto, las identidades, donde la memoria, en este caso cultural y comunicativa, permite configurar los repertorios de lucha del movimiento estudiantil de las Universidades Surcolombiana, del Cauca y de la Amazonia.

El anclaje epistemológico se da desde la posmodernidad, el posestructuralismo, los estudios culturales y lo que se podría denominar el sentipensamiento desde el sur, donde convergen propuestas como las epistemologías del sur, la decolonialidad, el poscolonialismo, el pensamiento andino y chi'xi, el campo de la comunicación-educación, entre otros, que propician serios debates a las ciencias sociales modernas que se caracterizaron por sus idearios de progreso, sus propuestas totalizadoras, hegemónicas y donde se privilegió el pensamiento binario, lo que generó superioridad y privilegios al pensamiento y al mundo occidental.

En este sentido, de acuerdo con García (2015), quien retoma a Laclau:

No es posible establecer ni la transformación total del quehacer histórico ni el cierre de ninguna de sus formas anteriores ni actuales, en tanto que ningún sistema discursivo (entendido este como sistema de significaciones) es completo, total, ni cerrado enteramente, sino que siempre tienen grietas, fallas, aberturas, aun cuando se presenten a sí mismos como suturados... No hay un en sí de la historia, sino una refracción múltiple de la misma, que depende de las tradiciones desde las cuales la interrogación tiene lugar, y que lo que se puede afirmar es un pluralismo de diferencias constitutivas que imposibilitan el cierre del sistema de la historia o de la historiografía. (p. 187).



El foco de atención en la presente investigación está dada por la memoria cultural y comunicativa propuesta por Erll (2012) y la memoria larga caracterizada por Silvia Rivera, intentando articularla con los procesos comunicacionales jóvenes que hicieron parte del Movimiento Estudiantil de la Universidad Surcolombiana, la Universidad del Cauca y la Universidad de la Amazonia.

De esta forma, la memoria cultural que se inscribe en un modelo sociocultural, considera como eje fundamental para su estudio los contextos donde interactúan los individuos, en este sentido se hablaría de las culturas de rememoración y se relacionaría con la comunicación desde el punto de vista de las interacciones sociales.

Por su parte, Silvia Rivera Cusicanqui (2018), considera que “la memoria colectiva sólo podría incidir en las luchas del presente en el contexto local de comunidades relativamente pequeñas, articuladas entre sí en redes diversamente bastas... pareciera más profunda mientras más circunscrito y compartido sea el espacio de realización de la vida en común” (p. 138).

Por lo tanto, arguye que “en la densidad polimorfa del presente, surge la posibilidad de una memoria del pasado que se reinterpreta y reactualiza, entonces, la codificación y recodificación se yuxtaponen, transformando las derrotas en victorias” (Rivera, 2018, p. 138). En este sentido, al retomar el caso del Movimiento Estudiantil de las Universidades en mención, donde se presume que se ha construido un territorio común, se percibe que en el imaginario colectivo se han presentado más derrotas que victorias, sin embargo, al no contar con un ejercicio sistemático de reconstrucción de memoria a partir de los procesos comunicacionales, difícilmente se podrán percibir los aciertos y avances en sus luchas.

Ahora bien, Rivera (2018) afirma que en las prácticas rituales y ceremoniales, a través de la oralidad y los actos performativos, se posibilita la invención de esas lecciones de la historia.

Es así que en este escenario de fuerzas, tensiones y disputas, cobra relevancia comprender el papel que ha jugado el Movimiento Estudiantil universitario en la construcción de un país que, a partir de la argumentación, el lenguaje, y sus procesos comunicacionales, probablemente proponen alternativas incluyentes que apuntan a la consolidación de una sociedad más democrática teniendo en cuenta la autoeducación y la manera en que comunican sus disputas. Así mismo, se presume que sus procesos comunicacionales le generan identidad y particularidades específicas.



Por ello, posiblemente, estos procesos comunicacionales han posibilitado la construcción de una memoria cultural y comunicativa transmitida de generación en generación que ha consolidado continuidades, pero también discontinuidades y latencias en su proceso histórico de lucha y en la construcción de sus identidades y subjetividades. Este escenario muestra que el Movimiento Estudiantil en la región suroccidente carece de una construcción sobre sus procesos comunicacionales y su memoria, lo que limita las posibilidades de apropiación y transformación de las mismas. En este sentido, vale la pena preguntarse: *¿Qué procesos comunicacionales han construido los integrantes del Movimiento Estudiantil de tres Universidades del Sur de Colombia (Surcolombiana, del Cauca y de la Amazonia) y cómo estas han configurado su memoria cultural y comunicativa entre los años 2010 y 2018?*

Metodología

Esta investigación opta por un estudio de tipo cualitativo, ya que pretende acercarse a las prácticas comunicativas y la memoria comunicativa del movimiento estudiantil de tres universidades del sur de Colombia. Se privilegia el enfoque hermenéutico, teniendo en cuenta que se busca comprender el sentido que los actores les dan a sus prácticas y memorias comunicativas, de carácter constructivista, teniendo en cuenta que se busca comprender e interpretar la realidad a partir de la perspectiva de los actores involucrados en la investigación.

La investigación se define como participativa, pues da la posibilidad que tanto investigadores como actores, elaboren permanentemente nuevas lecturas de sus realidades concretas y de esta forma, transformen su experiencia a través del diálogo y, por otra parte, realizar los ajustes necesarios al proceso investigativo, de acuerdo a los hallazgos que se vayan obteniendo, de acuerdo a la dinámica propia de una investigación de corte cualitativo.

Por otra parte, el diseño transversal permitirá que la investigación tenga en cuenta un lapso de tiempo determinado para la recolección de información. En cuanto a la delimitación espacial, se trabajará con las Universidades Surcolombiana, del Cauca y de la Amazonia.

La población para la investigación estará compuesta por dos fuentes: documentales y orales. Las fuentes documentales serán: documentos literarios como revistas, periódicos, memorias, biografías, Documentos oficiales, anuarios, archivos, artículos, boletines, piezas comunicativas que den cuenta del trabajo realizado por los integrantes del Movimiento Estudiantil. Las fuentes orales están constituidas por los actores del



Movimiento Estudiantil. Finalmente, Algunas de las técnicas e instrumentos para la recolección de información son: Líneas de tiempo, grupos focales, fichas de contenido.

Resultados y Discusión

El proceso investigativo en su fase actual ha planteado retos significativos en cuanto a la elección de la perspectiva epistemológica para el análisis de las variables con las que se ha venido trabajando. Por lo anterior, a continuación se pondrán en discusión algunos elementos que han podido recogerse en entrevistas y diálogos con algunos estudiantes y egresados de la Universidad Surcolombiana, que hacen parte de la construcción de la memoria cultural y larga del Movimiento Estudiantil:

1. *“La Universidad nació en las calles y en las calles la defenderemos”. Cuando se le pregunta a los estudiantes y egresados de la Universidad por esta consigna, les trae el recuerdo de cómo nació la USCO. Si bien no saben en qué momento se “institucionalizó” la consigna, en la memoria colectiva de sus estudiantes se encuentra que el nacimiento de la Universidad se dio gracias a la movilización social que desde finales de los años 60, emprendió la ciudadanía para contar con la primera universidad pública de la región.*
2. *Ágoras de la Universidad Surcolombiana. Fueron construidas en la década de los 90. En un principio los estudiantes de la época le llamaban la gallera como protesta porque al parecer, según algunos testimonios, se presentó un desfalco. Algunos recuerdan que incluso se realizó una pelea de gallos en dicho escenario para demostrar su inconformidad frente a lo sucedido. Actualmente, algunos consideran que las ágoras han perdido su valor como el máximo espacio para la toma de decisiones colectivas, teniendo en cuenta que se usa más para actividades recreativas que políticas. Sin embargo, en la memoria de algunos estudiantes y egresados se evidencia que recuerdan a las Ágoras porque allí se han ganado disputas como Reformas a los Estatutos, consolidación de procesos como la MANE y la UNEES, entre otras cosas.*
3. *“En los años 90, teníamos el imaginario de la mejor facultad llamada la Isla. No tenía problemas de asistencia y todas las clases se terminaban allí con una cerveza. Los análisis de contexto y políticos eran los temas a diario. Era un proceso enriquecedor para la formación política de los estudiantes y la Isla se constituyó en eso”⁴ (Relato de un profesor de la Universidad Surcolombiana). En esta entrevista se puede observar cómo se reconocen algunos espacios externos a la Universidad en los que estudiantes que hacían parte del Movimiento Estudiantil, conspiraban sobre algunos asuntos de su interés. En esta medida, por allí circulaban los discursos que posibilitarán el fortalecimiento de los lazos afectivos pero también políticos.*



4. *La huelga de hambre realizada por el Colectivo Las Libertas en la Universidad Surcolombiana durante el mes de diciembre del año 2003, logró modificar el estatuto electoral de esta Institución Educativa, permitiendo, que los estudiantes pudieran participar en la consulta estamentaria para la designación de rector o rectora, a partir de una terna elegida por el Consejo Superior Universitario. (Acuerdo No. 015 de 2004). En su momento, este fue un logro que se le atribuyó al Movimiento Estudiantil que contribuyó a darle continuidad a la discusión de la democracia, la autonomía, la financiación y el bienestar estudiantil.*

Con estos ejemplos, se puede establecer que la memoria cultural y larga del Movimiento Estudiantil de la Universidad Surcolombiana, atraviesa por elementos que actualmente los estudiantes tienen presente, como es el caso de la consigna que se mencionó en el primer ejemplo. Se considera que este es un elemento que hace parte de la memoria larga que se ha instaurado en el estudiantado que no necesariamente hacen parte del Movimiento Estudiantil. Es así que sin necesidad de contar con una formación ideológica, se reconoce esta frase y ha trascendido las generaciones.

En el caso de las ágoras, se considera que este escenario cumple la función de activar la memoria de los jóvenes. Su funcionamiento como monumento, permite generar el recuerdo y la evocación de la defensa de la educación pública y la disputa por espacios más democráticos y deliberativos, al igual que “La Isla”.

Con respecto a la huelga de hambre realizada por un grupo de mujeres, se puede observar que esta acción colectiva permitió una ganancia en su momento. Sin embargo, algunos actores de la Universidad la desconocen, por ello, difícilmente se puede convertir en un dispositivo para la construcción de un horizonte de lucha.

Conclusiones o reflexiones finales

A partir de lo anterior, se ha identificado que las investigaciones en el tema del movimiento estudiantil en Colombia y América Latina están fuertemente relacionadas con los estudios historiográficos donde se acude a la revisión documental principalmente. En este sentido, se generan nuevas posibilidades de comprender el estudio de los movimientos sociales en general y el movimiento estudiantil en particular, teniendo en cuenta los períodos de latencia y los procesos de formación de los integrantes del movimiento estudiantil que no necesariamente corresponden a los momentos visibles. Este asunto se convierte en un reto para futuros estudios acerca de esta temática porque posibilita conocer los procesos que adelantaron y las motivaciones que tuvieron los estudiantes para integrar estos movimientos.



Es importante tener en cuenta que las dinámicas de los movimientos sociales latinoamericanos, han permitido identificar que sus características son distintas a las europeas; sin embargo, se evidencia que en la generalidad de los trabajos se acuden a las categorías de los nuevos movimientos sociales para explicar los estudiantiles. En este sentido, es pertinente construir nuevas herramientas teóricas y metodológicas que permitan comprender las dinámicas que se perciben en estas latitudes con respecto al objeto de estudio como lo plantea Fauré (2018). Así, es importante tener en cuenta elementos de las teorizaciones que se adelantan desde el “sur”, como el poscolonialismo, las epistemologías del sur, el pensamiento subalterno, la(s) educación(es) y la(s) comunicación(es) popular(es), los movimientos populares, entre otros.

Por otra parte, cobra relevancia plantear investigaciones situadas y contextualizadas, porque lo que se percibe es que toman al movimiento estudiantil en general, esto es, a nivel nacional, sin tener en cuenta las dinámicas locales que tienen luchas y reivindicaciones propias y por lo tanto, formas distintas de construir. Esta ha sido una de las grandes discusiones que incluso ha generado rupturas en los momentos de articulación nacional porque aun se continúa con el centralismo, por lo tanto, la necesidad de acudir a la categoría territorio y región que no han sido exploradas a profundidad en las investigaciones acerca del movimiento estudiantil.

Finalmente, algunas preguntas que surgen a partir de lo discutido anteriormente, frente a las dinámicas que se vislumbran de los Movimientos Estudiantiles son:

1. ¿Qué ocurre con el movimiento estudiantil en los períodos de latencia y reflujo?
2. ¿Qué ocurre en las subjetividades de los jóvenes que les permite ser parte de colectivos, grupos o parches que se suman a las acciones del Movimiento Estudiantil?
3. ¿Qué elementos de la memoria larga adquieren en su proceso de formación los y las jóvenes?
4. ¿Cómo construir la memoria colectiva del movimiento estudiantil de la USCO que permita vislumbrar una emancipación futura?

Estos cuestionamientos plantean la necesidad de fortalecer una agenda de investigación en la que se posibilite ahondar en el movimiento estudiantil como objeto de estudio, desde la memoria,, que brinden elementos para el fortalecimiento de la



defensa de la educación pública y en este caso, de la Universidad Surcolombiana y de la región Suroccidente.

Notas

¹ Este trabajo hace parte de la investigación doctoral titulada “*Procesos comunicacionales y configuración de la memoria cultural y comunicativa del Movimiento Estudiantil de tres Universidades del Sur de Colombia entre 2010 y 2018*”, que se desarrolla en el Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el apoyo de la Universidad Surcolombiana.

² Profesor Universidad Surcolombiana. Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Énfasis: Lenguaje y Educación. Línea de Investigación: Comunicación – Educación en la Cultura. Correo electrónico: david.bernal@usco.edu.co

³ Relatoría del I Encuentro Regional del Suroccidente Colombiano. Universidad Indígena del Cauca UAIN. 7 y 8 de abril de 2018.

⁴ Este relato hace parte de la “Primera Tertulia: Estudiantes en Movimiento”, actividad organizada por el Semillero de Investigación Los Nadies, que hace parte del Grupo de Investigación InSURGentes, adscrito a las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas y Educación de la Universidad Surcolombiana.

Referencias Bibliográficas

Amador, J. (2014). Tránsitos y transiciones de los movimientos sociales en América Latina y El Caribe: una revisión necesaria. En R., García (Ed.), *Teorías y tramas del conflicto armado en Colombia* (pp. 71-109). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Amador, J. & Muñoz, G. (2018). Comunicación-Educación en Abya-Yala: lo popular en la reconfiguración del campo. *Revista Nómadas*, 49, 47-67.

Barbero, J. (1999). Retos de la comunicación a la educación. Propuesta conceptual para el colegio de educación y medios de la Universidad Pedagógica Nacional. En: O. Perdomo (comp.), *Palimpsestos y recorridos de la comunicación en la educación*. 177-196. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Consejo Nacional de Educación Superior (2014). *Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz*.

Departamento Nacional de Planeación (2019). *Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad (2018-2022)*. Iván Duque Márquez. Recuperado de



<https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022.aspx>

Dubravcic, M. (2002). *Comunicación popular: del paradigma de la dominación al de las mediaciones sociales y culturales*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Erell, A. (2012). *Memoria colectiva y culturas del recuerdo, estudio introductorio*. Bogotá: Universidad de los Andes.

Freire, P. (2007). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores.

García, M. (2015). Género, historia y memoria de los movimientos estudiantiles de México: reflexiones sobre la figura del “estudiante”. *Revista de Estudios de Género, La Ventana V*, n.º 42: 187-188.

Guevara, C. (s.f.). *Realidad y Lenguaje; y la poética como territorio musical de las palabras*.

Huergo, J. (2000). Comunicación/Educación: itinerarios transversales. En C. Valderrama (Ed.), *Comunicación-educación: coordenadas, abordajes y travesías*, (pp. 3-25). Bogotá, Colombia: Universidad Central, Siglo del Hombre.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2015). Decreto Número 2450 del 17 de diciembre de 2015.

Mejía, M. (Septiembre, 2018). *La pedagogía del oprimido, fundamento freireano de la educación popular*. Trabajo presentado en X Coloquio Internacional Paulo Freire 50 años de la Pedagogía del Oprimido. Opresión y liberación en la actualidad, Recife, Brasil.

Observatorio Nacional de Paz. (2012). *Actores y dinámicas de la conflictividad territorial. Percepciones populares en cuatro regiones de Colombia*. Bogotá: Planeta Paz.

Rivera, S. (2018). *Un mundo Chi'xi es posible. Ensayos desde un presente en crisis*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Zibechi, R. (2015). *Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo



Ocupaciones colectivas y colonialidad de la naturaleza:

Descomposicion y re-existencia ingenua.

Alejandro Sebastian Hermosilla Alarcon
Cristian Mauricio Valderrama Nuñez
Sofia Beatriz Sepulveda Hernandez

Introduccion

Este manuscrito presenta una reflexión sobre las relaciones existentes entre el capitalismo/colonialidad y dos ocupaciones colectivas que se desarrollan en la región del Bio Bio en Chile. Primero, el oficio de la pesca artesanal de la localidad de Caleta Tumbes (Caamaño, Castro, Moreno y Rodríguez, 2017) y, en segundo lugar; el oficio de la recolección de hierbas medicinales de la localidad de Manco (Crisóstomo, Hernández, Soto y Tapia, 2017).

Este análisis pretende identificar las posibilidades reales de resistencia que ofrecen las Ocupaciones Colectivas (OC), y los efectos en éstas de los procesos del capitalismo/colonialidad en una comunidad pesquera y una comunidad rural de la región del Bio Bio en Chile.

Para llevar a cabo este propósito, en primer lugar, se desarrollará la idea de OC, desde una perspectiva de las Terapias Ocupacionales del Sur (TTOO del Sur), según Valderrama (2019), luego se argumentará porque los oficios de la pesca artesanal y la recolección de hierbas medicinales son definidas como ocupaciones colectivas. Posteriormente se expondrá la conceptualización de la diada capitalismo/colonialidad. Para finalizar se presenta el análisis crítico propuesto, enfatizando en los efectos de los procesos de capitalismo/colonialidad en las ocupaciones colectivas presentadas.

Palabras clave

Extractivismo; Re-existencia; Decolonial; Ocupaciones colectivas; Descomposición.

Fundamentación

¿Que son las ocupaciones colectivas desde el Sur?

Al hablar de OC, se hace referencia principalmente a una diversidad de expresiones de prácticas ocupacionales, en las cuales desde la perspectiva de las TTOO del Sur, se podrían establecer algunas características constituyentes, que hacen posible que éstas sean comprendidas e incorporadas al discurso y prácticas disciplinares.

Entre estas características podemos señalar las siguientes: a) corresponden a una práctica social, histórica, situada, perteneciente a un campo de relaciones colectivas,



que otorgan y hacen posible la identificación de lo individual en el campo de relaciones sociales (Ramírez & Schliebener, 2014; Guajardo, 2014a); b) las OC a partir de las lógicas de participación pueden generar una sensación de bienestar o malestar en la comunidad, ligada a un sentido de pertenencia o despejo, fortaleciendo o debilitando la comunidad y la propia organización social, como lo plantean Ramugondo & Kronenberg (2015); Palacios (2013, 2017b); c) por último, las OC son una práctica de resistencia ante las injusticias y restauradores de las inequidades que provocan los procesos de capitalismo/colonialidad/patriarcado, como lo plantean los autores Simaan (2017), Huff et al. (2018).

A partir de estos planteamientos, se podría establecer, por una parte, que las OC transitan entre dicotomías como el bienestar/malestar, liberación/opresión, función/disfunción. Y, por otro lado, las OC marcan una posición y una posibilidad de prácticas de insurgencia y rebeldía antes las condiciones sociales y materiales adversas que produce el capitalismo neoliberal, reivindicando lo colectivo, lo ancestral, la colaboración y el apoyo mutuo.

Para efectos de este texto, los oficios que se exhiben se consideran OC de carácter ancestral, territoriales y se encuentran estrechamente vinculadas a la naturaleza. A continuación, se presentará una breve argumentación para esta idea.

Caamaño et al. (2017), plantean que la *pesca artesanal* es una práctica desarrollada históricamente por los pobladores y pobladoras de las caletas, en la cual se relacionan respetuosa y armoniosamente con los recursos naturales que entrega el mar, recursos que configuran su cultura y una importante fuente de trabajo. Los recursos del mar se extraen para el consumo propio y en algunos casos para pequeñas ventas dentro de la misma comunidad. La pesca artesanal es como lo señala un pescador de la zona Hobeni, una localidad en la provincia de Cabo Oriental, Sudáfrica: “Pescar es simplemente vida” (Rodríguez, 2016 p. 53).

Por su parte, Crisóstomo et al. (2017) señalan que la *recolección de hierbas medicinales* es una actividad agrícola, comunitaria, desarrollada principalmente por mujeres, en armonía con la naturaleza, en tanto contempla los tiempos de siembra y cosecha. Es una actividad que se constituye como una forma de trabajo cooperativo y de pequeña escala.

Si para la pesca artesanal el mar es esencial para su desarrollo. En el caso de la recolección de hierbas medicinales la tierra y el agua son centrales para esta actividad.



Por tanto, la naturaleza es central para la existencia de ambas OC. En esta misma línea argumentativa, a partir de lo que propone Simó (2016), quien señala que los pueblos originarios presentan una arraigada conciencia ecológica en su relación que establecen con la naturaleza. Para efectos de este texto, la pesca artesanal y la recolección de hierbas, son consideradas prácticas ancestrales que representan la noción de cosmos de los pueblos originales o primeras naciones, es decir, son prácticas que expresan a sus formas de vida, de ser, de estar y hacer en el mundo, especialmente porque presentan una relación constitutiva con la naturaleza, es decir, no son posibles sin la naturaleza

Hechas estas descripciones de los oficios, es posible establecer una gran sintonía entre algunos aspectos descritos de las OC y las características de la pesca artesanal y la recolección de hierbas medicinales, especialmente a lo vinculado a su naturaleza social, colectiva y el efecto de cohesión social y pertenencia que producen sus prácticas.

El aspecto de resistencia y lucha descrito anteriormente, parecen no estar presentes en estos oficios. Sin embargo, a partir de lo que propone Santos (2017), las TTOO del Sur tienen como principal preocupación identificar el sufrimiento que han sufrido una vasta población a causa del sistema de dominación y explotación que producen el capitalismo, colonialismo y patriarcado. En este sentido, los autores de este trabajo suponen que estas OC pueden ejercer resistencia y lucha, frente a las amenazas y riesgo que provocan los procesos capitalistas/colonizantes/patriarcales, en las comunidades y oficios que se han descrito.

Esta capacidad de lucha y resistencia de las OC es la posibilidad de superar los procesos de exclusión y marginación que sufren los grupos definidos como subalternos e inferiores (Valderrama, 2019).

Comprendiendo las Ocupaciones Colectivas desde el capitalismo/colonialidad

Hablar en torno a los procesos de dominación que provocan el capitalismo/colonialidad/patriarcado, resulta tremendamente extenso y complejo, por su historia, tal como lo señalan Grosfoguel & Mignolo (2008) es un proceso que se inicia con la invasión de Europa a América, Asia y África, y que incluía la trata de esclavos en nombre de la salvación y el desarrollo económico. Por tal razón para articular las reflexiones que contiene este texto, se recurrirá a una de las expresiones de estos procesos de dominación: la colonialidad de la naturaleza.



Esta decisión se sustenta por varias razones: primero, tal como se mencionó anteriormente, las OC que se presentan, son posibles solo gracias a un vínculo armonioso con la naturaleza; en segundo lugar, a partir de lo que señala Simó (2016) los y las terapeutas ocupacionales hemos prestado poca atención a la relación entre ocupación y naturaleza, por tanto este escrito pretende profundizar sobre este tema; y por último, como señala Albán y Rosero (2016) para los procesos de dominación del capitalismo, colonialidad y patriarcado, la naturaleza se convirtió en una fuente inagotable de riqueza, que debía ser explotada y dominada por el hombre y transformarla de acuerdo con sus necesidades, cuestión que puede generar efectos perjudiciales en las comunidades rurales y costeras, como son los casos que aquí se desarrollan.

La colonialidad de la naturaleza según Alimonda (2011), significa que la naturaleza es comprendida por el capital como un objeto más que existe solo para ser explotado, aunque esto implique destruir formas productivas sobre las que descansan procesos sociales y culturales, la biodiversidad para establecer monocultivos y envenenar fuentes de agua.

Por su parte Grosfoguel (2016), plantea que la colonialidad de la naturaleza se sostiene en la comprensión moderna eurocéntrica occidental de naturaleza, dado que según esta cosmovisión la naturaleza es un medio para un fin y lo humano es concebido como algo exterior a esa naturaleza.

Metodología

Este documento corresponde a un ensayo analítico el cual “identifica los elementos de un objeto o un evento y la relación entre ellos, los evalúa, deduce sus implicaciones y los presenta” (López, Huerta, Ibarra y Almazán, 2014) el cual se realiza con la finalidad de reflexionar y analizar el concepto de Ocupación Colectiva, en sus dimensiones de resistencia y efectos frente a la colonialidad de la naturaleza, desde una mirada decolonial.

Se consideraron dos investigaciones de pregrado de la carrera de Terapia Ocupacional realizadas el año 2017, que trabajaron el concepto de ocupación colectiva, la primera “Significados otorgados por la agrupación sol naciente, de la aldea de manco, a la rearticulación de la recolección de hierbas medicinales como ocupación colectiva posterior a vivenciar el desastre socio-natural ocurrido en el año 2017 (Crisóstomo, Hernández, Soto y Tapia) y la segunda “El rescate del oficio de la pesca artesanal como



ocupación colectiva y su relevancia en la localidad de caleta Tumbes. (Caamaño, Castro, Rodríguez y Moreno, 2017)

Haciendo uso entonces de un análisis hermenéutico que se encuentra “en permanente apertura, producto de la actividad reinterpretativa de la que es fruto. Así, dicha reinterpretación no es pura referencia al texto, sino que a la interpretación de la interpretación que hace el autor respecto a un fenómeno determinado” (Cárcamo, 2015) jugó un rol fundamental para realizar la comprensión desde la óptica de las TTOO del Sur en la reinterpretación y reflexión que se llevó a cabo por los autores del ensayo.

Resultados y discusión

Ocupaciones Colectivas del Sur: Descomposición y Re-Existencia Ingenua Perversa.

A continuación, se presentará la reflexión en torno a las posibilidades de resistencia y los efectos de los procesos de capitalismo/colonialidad/patriarcado. La primera ocupación colectiva que se presentará en la pesca artesanal de caleta Tumbes y en segundo lugar, la recolección de hierbas medicinales de la comunidad de Manco.

Pesca Artesanal: Una ocupación colectiva en descomposición.

Tumbes es una caleta pesquera que está situada en el borde Oeste de la denominada Península de Tumbes, en la boca chica de la Bahía de Concepción, a unos ocho kilómetros del centro de Talcahuano, Región del Bio Bio. La península de Tumbes es un istmo que separa la bahía de San Vicente de la bahía de Concepción. La actividad principal está asociada a la explotación del recurso marino, existiendo un número considerable de actividades relacionadas como la extracción de algas y lapasca en embarcaciones menores y de menor tonelaje (Caamaño et al. 2017).

El año 2013 se promulga la ley 20.657, que privilegia los intereses del gran empresariado en Chile, es decir, que beneficia el desarrollo del capital por sobre las producciones locales. Esta ley implica una serie de consecuencias negativas hacia la pesca artesanal. Primero, aumenta las millas disponibles para que la pesca industrial extraiga los productos del mar. Segundo, se ejerce un control mayor sobre las embarcaciones artesanales y tecnologiza sus prácticas, a través de la inclusión obligatoria de aparatos de control satelital como GPS, que permita identificar donde están, y no se alejen de las millas que están autorizados a pescar. Tercero, los seres vivos del mar se están extinguiendo por la extracción sin límites y desregulada de la pesca industrial (Caamaño, et al. (2017).



A partir de estos 3 elementos expuestos y al relacionarlos con la colonialidad de la naturaleza que realiza el capitalismo/colonialidad/patriarcado, describiremos los mecanismos que operan para que estos procesos de dominación se desplieguen en la naturaleza, por ende en la OC denominada pesca artesanal. Nos referiremos al extractivismo, la cientifización y la tecnologización.

El extractivismo económico es definido como el despojo, robo, apropiación y saqueo de los recursos naturales presentes en el Sur Global (Grosfoguel, 2016). En este caso, el extractivismo es el método por el cual, la pesca industrial extrae los productos de manera irracional e irrespetuosa de los procesos propios del mar.

El extractivismo económico se apoya en instrumentos que favorecen la eficacia y eficiencia de la productividad extractivista, y ayudan a reproducir la racionalidad de la modernidad occidental eurocéntrica. Estos instrumentos corresponden a la cientifización y tecnologización. La tecnologización corresponde a la fascinación de incorporar materiales y tecnología con fines de mejorar la rentabilidad, que es sustentada en la cientifización, es decir el uso de la noción europea de conocimiento, la cual se puede aplicar en cualquier actividad humana (Albán y Rosero, 2016). En palabras de Grosfoguel (2012) se produce un racismo epistémico, es decir, los conocimientos producidos por la ciencia en el campo de la productividad capitalista son considerados como superiores y se imponen, en relación a los conocimientos ancestrales de los indígenas y en este caso, de los pescadores artesanales.

Si se considera lo que plantea Santos (2013), la tecnologización y cientifización produce dos efectos en la pesca artesanal como ocupación colectiva; el primero es que fortalece la monocultura del tiempo lineal, es decir, promueve la idea que todo lo artesanal y ancestral es parte del pasado, lejano al progreso y desarrollo; y segundo, se instala la lógica de la no existencia, basada en la lógica productivista, en la cual el crecimiento económico es incuestionable y es justificable en base a la ciencia y la tecnología, dado que lo ancestral, lo artesanal, no produce como se requiere de acuerdo al capitalismo neoliberal. Ambos mecanismos provocan que las prácticas de la pesca artesanal son silenciadas y negadas.

La tecnologización y cientifización como instrumentos de la racionalidad occidental, desde una perspectiva de las TTOO del Sur, permiten analizar sus efectos en diferentes territorios, comunidades y con ello de las Ocupaciones Colectivas que en dichos lugares se desarrollan.



Para efectos de las reflexiones que se ofrecen en este documento, uno de los efectos del extractivismo, la tecnologización y cientifización en la pesca artesanal, es que esta OC se está extinguiendo en tanto, las generaciones posteriores (hijos y nietos) de los actuales pescadores artesanales de caleta Tumbes, han optado por desarrollar otras actividades productivas, como turismo, estudiar en las ciudades, trabajar de obrero en las construcciones, ya que la pesca artesanal no permite una subsistencia cómoda (Caamaño et als, 2017). Al mismo tiempo, muchas familias que habían desarrollado la pesca artesanal como forma de vida, se han visto en la obligación de dedicarse a la artesanía y gastronomía, en otros casos los mismos pescadores artesanales usan sus barcazas para el turismo (Caamaño et als, 2017).

Según Grosfoguel (2012), a partir de lo recién expuesto, podemos señalar que la pesca artesanal se encuentra en la zona del *no ser*, es decir, aquella zona o posición definida como inferior, negada, marginada de la zona del *ser*. Para este caso, la zona del *ser* es el lugar habitado por aquellos que desarrollan otras actividades productivas, las que son fomentadas y valoradas por el modelo de desarrollo capitalista/colonial/patriarcal. La zona del *ser* domina pasiva y activamente la zona del *no ser*, es decir a la pesca artesanal, a los pescadores, sus familias, sus prácticas, sus costumbres, sus sueños, sus anhelos, hasta su propia capacidad de lucha y resistencia, empujándola a su descomposición.

En relación a este último punto, las fuerzas de los procesos capitalista/coloniales/patriarcales son tan potentes que en los pescadores artesanales de Caleta Tumbes y sus familias, existe una sensación de incertidumbre y sentimientos de resignación, podríamos señalar que esto implica que los pescadores artesanales sienten que esta actividad desaparecerá y no hay nada que se pueda hacer al respecto (Caamaño et als, 2017). En palabras de Grosfoguel (2016), en caleta Tumbes se está experimentando el extractivismo ontológico, es decir la desaparición y extinción de una forma de ser, estar y hacer en el mundo

¿Qué podemos decir con respecto a las posibilidades de resistencia de la pesca artesanal como OC, en caleta Tumbes?

Sin duda, que dada la situación y la historia de los pescadores artesanales y sus familias de Caleta Tumbes, esta OC se encuentra en una situación crítica, ya que a juicio de los autores de este texto, se ha desplegado un proceso de descomposición. Esta palabra puede tener al menos 2 significados, el primero descomponerse es pudrirse, algo que



se fermenta; y, por otro lado, descomponerse es fragmentarse, dividirse, escindirse en varios pedazos.

Según el análisis recién presentado, creemos que con la pesca artesanal ocurren ambos tipos de descomposición, se está pudriendo la actividad productiva de la pesca artesanal, los peces son pocos y están pudriéndose las tradiciones propias de una comunidad que basaba su existencia en una relación armoniosa con el mar; y al mismo tiempo, los sujetos que estaban involucrados en esta ocupación colectiva comienzan a desarrollar otras actividades productivas para sobrevivir, seducidos por el capitalismo y por la resignación de que la pesca artesanal está desapareciendo, fragmentando el tejido social que se formaba y que permitía la vida en comunidad en torno al mar en Caleta Tumbes.

En estas condiciones las posibilidades de resistencia y lucha parecen estar extintas y definitivamente no ser posibles. Objetivamente las fuerzas involucradas en esta transformación de la pesca artesanal parecen imposibles de resistir. Las subjetividades y las prácticas desarrolladas por los integrantes de esta OC, dan cuenta de los profundos efectos que producen estas fuerzas.

Por ahora parece difícil mantener la pesca artesanal como una OC que genere sentido de comunidad, cohesión social, bienestar psicosocial. Más bien parece que en este caso la OC, sin querer que sea así, ha sido empujada al malestar, la fragmentación, marginación y aislamiento. Sin embargo, en ese mismo contexto, sus integrantes han buscado formas para reinventarse como sujetos sociales y continuar luchando en su propio territorio, a través de la gastronomía y turismo comprender la pesca artesanal como una OC, es un llamado a profundizar este concepto y sus alcances desde las TTOO del Sur.

Recolectoras de Hierbas Medicinales: La perversión del poder y la ingenuidad del territorio.

Las lógicas capitalistas/coloniales son los cimientos del poder hegemónico y la razón occidental es la que busca propagarse por las subjetividades de los sujetos y las sujetas., como sostiene Quijano (2000, citado en Suarez, 2015) es un elemento central del patrón de poder capitalista, y obtiene su fundamento en la clasificación racial/étnica de la población del mundo, este patrón de poder opera a nivel material y subjetivo, y, por ende, a traviesa toda la vida social. En este contexto, los saberes y las prácticas ancestrales del Sur se ven amenazadas y/o tentadas por las estructuras que representan el poder dominante. Este es el caso de las recolectoras de hierbas



medicinales de Manco; localidad rural de la comuna de Florida situada en la Región del Bío Bío. Este grupo llamado “Sol Naciente”, tiene como principal actividad la agricultura, la cual ha ido decayendo en los últimos años producto de la escasez de agua y la sequía que en gran parte es producida por la plantación de eucaliptus en su territorio, a cargo de Forestal Arauco (Crisóstomo, et al. 2017).

Esta OC al igual que los pescadores de la caleta tumbes, vive, siente y hace en armonía con la naturaleza, puesto que respetan los tiempos de las plantas y hierbas, y consideran a la tierra como un elemento central de su cotidianidad, la cual deben proteger y atesorar. En esta ocupación colectiva se expresa el legado de una práctica ancestral de los pueblos originarios que basaban su actividad en la recolección de frutas, hierbas u otros. Tal como menciona Cardenas, Montiel y Grace (1991) con relación a los Chonos, eran pescadores y recolectores de playa y mar, dieta que era complementada con la caza acústica y la obtención de hongos y bayas.

Por su parte, las recolectoras de hierbas medicinales de Manco conviven territorialmente con un dispositivo colonial/capitalista llamado Forestal Arauco, empresa dedicada a la forestal, papelería y celulosa en base a plantación, extracción y procesamiento de pinos y eucaliptos como principal materia prima. Las forestales han tenido un auge en su desarrollo a partir de los años 1970 en Chile, donde la promulgación de la ley 701 modifica la “Ley de Bosques” permitiendo la expansión de la plantación invadiendo diversos territorios de pueblos originarios y comunidades rurales. (Crisóstomo et al. 2017).

En relación con lo anterior se extrae que, la colonialidad y la globalización del capitalismo destruye y se apropia de los territorios devorando los recursos naturales que éstos poseen. El asunto es que los territorios no son solo lugares en los cuales hay recursos y bienes nada más, sino que como ilustra Haesbaert (2004), citado en Herner (2009) el territorio contiene una dimensión simbólica que da cuenta de la apropiación e identidad territorial que los grupos sociales que pertenecen a ese territorio le otorgan al mismo

Así ocurre en esta OC donde el territorio es fundamental para su existencia y desarrollo, sin embargo, se evidencia como la colonialidad de la naturaleza opera en este lugar, que, para efectos de este análisis, será materializada en la Industria Forestal, la cual se considera un dispositivo capitalista/colonial central, es decir, que se entiende como una estructura que despliega diversos mecanismos para expandir la acumulación del capital y la racionalidad occidental. Estos mecanismos serán descritos a continuación.



Al igual que en la pesca artesanal de la caleta Tumbes, estos mecanismos son, la cientifización y la tecnologización, sin embargo, en el caso de la OC de las recolectoras de hierbas medicinales de Manco ambos se encuentran asociados al proceso *dislocación ocupacional* entendido por Pizarro, Estrella, Figueroa, Helmke, Pontigo & Whiteford (2018) como la falta de oportunidades para la ocupación relacionadas con el territorio y su impacto en la vida de las personas (...) En este sentido, la dislocación ocupacional se relaciona con el impacto negativo que se produce en la vida ocupacional de un sujeto o grupo, al ser desarraigado del territorio apropiado. Lo que en este caso es ocasionado por la industria forestal y sus intereses extractivistas.

La tecnologización y cientifización de procesos que eran artesanales, basados en conocimientos situados, experienciales e históricos de las comunidades, hoy son empujados a alinearse a procesos altamente burocráticos y administrativos desde los dispositivos coloniales/capitalistas para “poder existir”.

Las recolectoras de hierbas medicinales no se encuentran ajenas a esta situación, tal es el caso que actualmente se encuentran en la gestión por obtener una resolución sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud, en la cual se exige una sala que cuente con el cumplimiento de normas sanitarias y un horno deshidratador para procesar sus hierbas, con el objeto de dar respuesta a los requerimientos de los procesos posteriores a la recolección (como es el secado, limpieza, envasado, etc).

Dada la complejidad para cumplir con los requerimientos solicitados, la OC requiere postular a proyectos para obtener fondos de financiamiento y comenzar su funcionamiento de manera legal y formal, a través de uno de los tantos dispositivos coloniales capitalistas que controlan la actividad de las comunidades, como es el caso del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), lo que evidencia el control sobre la OC mediante las vías de legitimidad institucional.

Mientras se esperan estos resultados a los financiamientos y la OC genera una capacidad de gestión que otorgue cierta autonomía en sus decisiones y accionar, la Industria forestal les proporciona dichas tecnologías y herramientas para que puedan “seguir existiendo”, este hecho implica que la racionalidad tecnologizante y cientifizante de la colonialidad de la naturaleza, son la plataforma para reforzar y consolidar dicha racionalidad en las subjetividades que integran la OC. Este efecto se logra a través de la implementación de capacitaciones laborales, otorgar espacios físicos para que la agrupación Sol Naciente pueda comercializar sus productos y la entrega de maquinarias; todo para tecnologizar sus prácticas, saberes y sentires.



Lo anterior, para los autores tiene su base en la convivencia territorial que existe entre la industria forestal y la Ocupación Colectiva ya que, al compartir el territorio, la Industria busca expandir y profundizar su modelo de producción y desarrollo. En tal sentido, podemos señalar, según Haesbaert (2012), citado en Toledo (2017) que el territorio se configura como producto de una relación desigual de fuerzas, involucrando el control político-económico del espacio y su apropiación simbólica. Es decir, la industria forestal otorga las herramientas necesarias para la producción de hierbas medicinales, ofreciéndolas de una manera amable y desinteresada, ocultando que finalmente controla el territorio en su extensión geográfica, únicamente con el fin de expandir la plantación del monocultivo; promoviendo que los códigos que se tienen sobre el territorio se tensionen, ¿es la naturaleza cosmos que nos brinda medicina o un espacio productivo y de apropiación?

¿Qué podemos decir con respecto a las posibilidades de resistencia de las recolectoras de hierbas medicinales de Manco, como OC?

El escenario antes expuesto propicia mecanismos adaptativos o una forma de reinención de la OC, que los autores de esta reflexión consideran que corresponde a una *re-existencia ingenua*. La re-existencia, es el proceso permanente de adaptación a un medio hostil y a los efectos del poder colonial, -y también capital como en el caso de las recolectoras de Hierba Medicinal de la localidad de Manco-, desarrollando formas de alto contenido creativo para continuar existiendo tanto en el marco legislativo establecido como fuera de este (Gómez, 2006; Albán 2010).

Por su parte, Albán (2009) propone que la re-existencia consistiría en revalorar lo que nos pertenece desde una perspectiva crítica frente a todo aquello que ha propiciado la renuncia y el auto-desconocimiento.

¿Qué re-existencia podemos pensar en torno a las recolectoras de hierbas medicinales de Manco, entendida como OC?, Para los autores y de acuerdo con los antecedentes entregados, la OC de recolectoras de hierbas medicinales, presenta una perspectiva acrítica, solo fluyendo en el horizonte de continuar existiendo, viviendo en su territorio, cuidando sus lazos, sin embargo, sin oponer resistencia activa la industria forestal que astutamente ha logrado diluirlas.

Dicho lo anterior, consideramos que re-existen entonces de forma ingenua, y es ingenua porque se despliega en base al engaño y perversión ejercida sobre las recolectores de hierbas medicinales, ya que asumen dócilmente los discursos y las prácticas coloniales/capitalistas que ofrece la forestal Arauco, con el propósito de



subsistir y re-existir, sin resistir la extinción de la práctica ancestral de recolección de hierbas, al mismo tiempo que los habitantes de ese territorio se ven obligados a dirigirse a otras localidades en búsqueda de trabajo, otros deben arrendar sus territorios y propiedades a privados, quienes realizan plantaciones que luego son vendidas a las forestales; y por último, gran parte de sus pobladores trabajan en las forestales aledañas a la comunidad, la misma que disminuyó su lugar para desarrollar la recolección de hierbas medicinales” (Crisóstomo, et al., 2017).

De esta forma, la industria forestal “invita” y/o “seduce” a la Ocupación colectiva a modificar sus discursos, prácticas y sentires, en sintonía con lo planteado Pérez (2014), la industria forestal utiliza con gran habilidad la capacidad de gestión del poder, dado puede mantener el dominio sobre la comunidad, entregando cuotas de poder divididos, repartidos y atomizados, situación que es visible en esta OC, donde ya no se reubica a las personas, no se les expropia, sino que se les compra el “terreno” y se le brinda trabajo industrial en ese mismo espacio que antes fue su comunidad, solo que ahora es validado por la hegemonía capital.

Estas situaciones también ocurren en otras comunidades que son intervenidas por las forestales, las que implementan estrategias sustentadas en la generación de alianzas y confianzas con las comunidades y de esa manera acceder a la tierra, como es el caso de Huaripura, en India, donde las forestales reubican a las personas ignorando la conexión de las comunidades con el territorio, como menciona Gujjar, un anciano del sector:

“(...) esa familia [señala una gran cabaña del pueblo] tenía unas deudas tan grandes que los 10 lakhs que le ofreció el Servicio Forestal se convirtieron en su billete de salida de ese lío. No los culpo, pero si no permanecemos unidos, el Servicio Forestal aprovechará esa división y nos reubicará a todos (...)” (Ródriguez, 2016, p. 104)

La experiencia anterior permite analizar como las forestales son una industria que no solo explota la tierra como un recurso económico, sino con la tierra como territorio, como espacio que se habita por comunidades, extinguiendo sus historias, sus identidades, sus legados y su vínculo con la naturaleza.

Es así como la industria forestal, usurpa los saberes de la ocupación colectiva para gestionarlos de tal forma que entren en la lógica capitalista y se vuelva una actividad económica rentable, despojándola de su origen comunitario, social y político. Esto comprendido desde el extractivismo epistemológico tal y como señala Grosfoguel (2006)



el cual tiene como objetivo el saqueo de ideas para mercadearlas y transformarlas en capital económico.

Conclusiones

Las ocupaciones colectivas representan una posibilidad para las TTOO del Sur, de reconocer y comprender los efectos que produce el poder de la colonialidad/capitalismo, en las formas de vivir y organizar ancestrales, así como también plantea Escobar (2000), el efecto de estos procesos de dominación en las prácticas basadas en el lugar de las comunidades y los colectivos considerados subalternos, inferiores y marginados.

Este poder hegemónico y dominante se despliega a través de mecanismos opresores, usurpadores y controladores (extractivismo, colonialidad de la naturaleza, tecnologización, cientificación, legislación, entre otros).

Según el análisis recién presentado, las ocupaciones colectivas ante el poder hegemónico colonial/capitalista presentan distintas respuestas, se transforman, se disuelven, se fragmentan, se cohesionan, etc. Esto da cuenta que las ocupaciones colectivas son versátiles, que en algunos casos esa versatilidad permite la re-existencia y la descomposición. Precisamente en los mecanismos que provocan estas respuestas son un campo de conocimiento necesario abordar para las TTOO Sur.

Lo anterior se plantea, en tanto que, al analizar estos mecanismos, permitirá comprender las posibilidades concretas que tiene las TTOO del Sur, a través de las ocupaciones colectivas, de buscar alternativas descolonizantes/anticapitalistas/feministas/indigenistas/ que permitan a los sujetos, comunidades y colectivos de intervención dignificar sus vidas, emanciparse y liberarse.

Otro aspecto que emerge de este trabajo es la relación que establece las TTOO del Sur con la naturaleza, un campo en disputa ya que el capitalismo lo reconoce como un recurso natural, posible de explotar y con ello exterminar. Para las TTOO del Sur entonces, la naturaleza es un ser vivo que requiere ser respetado para coexistir con él, en armonía, de lo contrario, se corre el riesgo de la propia extinción. En ese contexto, las ocupaciones colectivas ancestrales y versátiles podrían jugar un papel relevante en la preservación y conservación de la naturaleza y sus entornos.

Referencias bibliográficas

Albán, A., Rosero, Jose (2016). Colonialidad de la naturaleza: ¿imposición tecnológica y usurpación epistémica? Interculturalidad, desarrollo y re-existencia. *Nomadas*, Colombia, 27-41.



Alimonda, Héctor. 2011 "La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la ecología política latinoamericana" en Héctor Alimonda (coord.) *La naturaleza colonizada. Ecología Política y minería en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO/Ciccus).

Almazán, K., Huerta, J., Ibarra, J. & López, M. (2014) *Manual básico para la escritura de ensayos. Estudios y propuestas de lenguaje y educación*. México, Asesoría en Tecnologías y Gestión Educativa, S.A.

Caamaño, Tania, Castro, Luz, Moreno, Andrés, Rodríguez, Makarena. (2017). El rescate del oficio de la pesca artesanal como ocupación colectiva y su relevancia en la localidad de caleta tumbes, Seminario de título, Universidad Andrés Bello, Concepción.

Cárcamo, H. 2005. Hermenéutica y Análisis Cualitativo. Cinta Moebio. Vol 23: 204-216

Cardenas, R; Montiel, D; Grace, C. (1991). Los Chonos y los Veliche de Chiloé. Editorial Olimpo, Santiago, Chile.

Escobar, Arturo. El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?. En: Lander, Edgardo (comp). (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO, 68–87.

Grosfoguel, Ramón. (2011). La descolonización del conocimiento. Diálogo crítico entre Frantz Fanon y Boaventura de Sousa Santos. 97-108.

Grosfoguel, Ramón. (2016). Del «extractivismo económico» al «extractivismo epistémico» y al «extractivismo ontológico»: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo. *Tabula Rasa*, Bogotá, 24, 123-143.

Grosfoguel, R., & Mignolo, W. (2008). Intervenciones decoloniales: una breve introducción. *Tabula Rasa*, (9), 29-37.

Guajardo, Alejandro. Una Terapia Ocupacional Crítica como posibilidad. En: Dos Santos, V.; Donatti, A. (2014). *Cuestiones contemporáneas de Terapia Ocupacional en América del Sur*. Curitiba: Editorial CRV.

Hermosilla Alejandro; Reyes Camila; Roa Michelle; Sepúlveda Sofía. (2016). *Uso Terapéutico De La Cannabis: Una Lucha Desde La Ocupación Colectiva*. Tesis pregrado. Universidad Andrés Bello, Concepción.

Herner María. (2009) Territorio, desterritorialización y reterritorialización: un abordaje teórico desde la perspectiva de Deleuze y Guattari. *Huellas*, (13), 158-171.

Huff, S; Laliberte, Debbie, Magalhães, Lilian; Lawson, Erica. (2018). 'Africana womanism': Implications for transformative scholarship in occupational science, *Journal*



of *Occupational Science*, 25(4), 554-565.

<https://doi.org/10.1080/14427591.2018.1493614>

Núñez, Cristian Mauricio Valderrama. (2019) Terapias Ocupacionales del Sur: una propuesta para su comprensión. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 27(3), 671-680.

Palacios, Mónica. Sentido de Comunidad y Ocupaciones Colectivas. En: Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile. et al. (2013). *50 años de Terapia Ocupacional en Chile: prácticas, epistemologías y realidades locales*. P. 143-149, Chile.

Palacios, Mónica. (2017). Acerca de Sentido de Comunidad, Ocupaciones Colectivas y Bienestar/Malestar Psicosocial. Con jóvenes transgresores de territorios Populares. Tesis doctoral. Universidad de VIC, España.

Pérez, Carlos. (2014). Para una crítica del poder burocrático. Santiago: editorial LOM

Pizarro, E., Silvana Estrella, Fernanda Figueroa, Francisca Helmke, Claudia Pontigo & Gail Whiteford (2018) Entendiendo la justicia ocupacional desde el concepto de territorio, una propuesta para la ciencia de la ocupación, *Journal of Occupational Science*, 25:4, xvi-xxvi, DOI: 10.1080/14427591.2018.1487262

Ramírez, R, Schliebener, M. (2014). Manifiesto latinoamericano de terapia ocupacional y ocupación. *Revista TOG*, Galicia, 11(19), 1-18.

Ramugondo, Eleinawi; Kronenberg, Frank. (2015). Explaining Collective Occupations from a Human Relations Perspective: Bridging the Individual-Collective Dichotomy. *Journal of Occupational Science*, 22(1), 3-16.

Ramugondo, Eleinawi. (2018). Healing work: intersections for decoloniality, *World Federation of Occupational Therapists Bulletin*, 74(2), 83-91. <https://doi.org/10.1080/14473828.2018.1523981>

Ricaute, I. y Ricaute, A. (2015). Sobre el impacto de la conquista de América en el ser humano latinoamericano. *Ambiente Jurídico* (18). pp. 107-127

Rodriguez, Cesar. Extractivismo versus derechos humanos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016.

Romero Caballero, B. (2015). "La colonialidad de la naturaleza. Visualizaciones y contra-visualizaciones decoloniales para sostener la vida". *Extravío. Revista electrónica de literatura comparada* 8. Universitat de València, p. 1-22.

Santos, Boaventura. (2013). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Chile: Ediciones LOM,



Santos, B. S. una nueva visión en Europa: aprender del Sur global. En: Santos, B; Mendes, J. (eds). *Demodiversidad, imaginar nuevas posibilidades democráticas*. México: ediciones Akal, 2017, p. 59-92.

Simaan, J. (2017). Olive growing in Palestine: A decolonial ethnographic study of collective daily-forms-of-resistance. *Journal of Occupational Science*, 24(4), 510-523.

Simó, S. (2012) Terapia Ocupacional eco-social: hacia una ecología ocupacional. *Cadernos de Terapia Ocupacional UFSCar*, São Carlos, v. 20, n. 1, p. 7-16.

Suárez Rojas, Luis. (2015). Colonialidad, Hegemonía y Naturaleza en tiempos Neoliberales en el Perú

Toledo, V. Territorio y acumulación. Sobre megaempresas y lógica del agronegocio en el noroeste argentino. *Trabajo y Sociedad* (29), p. 177 – 193.